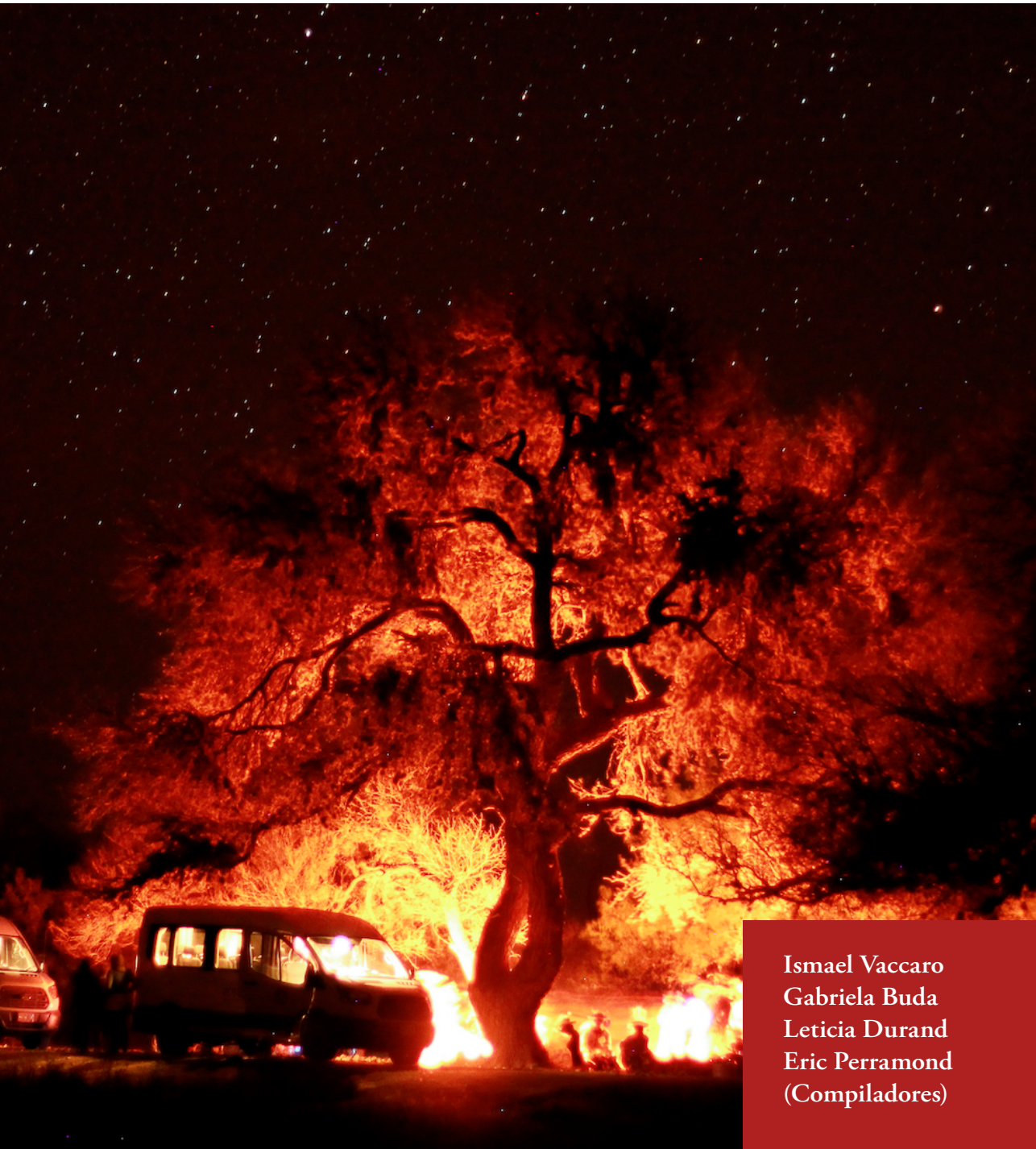
Introducción a la ecología política: la emergencia de una forma particular de analizar las disputas ambientales



Ismael Vaccaro
Gabriela Buda
Leticia Durand
Eric Perramond
(Compiladores)

Introducción a la Ecología Política: La emergencia de una forma particular de analizar las disputas ambientales

Ismael Vaccaro
Gabriela Buda
Leticia Durand
Eric Perramond
Compiladores

EL COLEGIO DE SAN LUIS
CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO INDÍGENA cicada
COLORADO COLLEGE
THE HULBERT CENTER for SOUTHWEST STUDIES

304.2
I61

Introducción a la ecología política : la emergencia de una forma particular de analizar las disputas ambientales [Libro electrónico] / compiladores Ismael Vaccaro, Gabriela Buda, Leticia Durand, Eric Perramond. -- 1ª edición. -- San Luis Potosí, S.L.P. : El Colegio de San Luis, A.C., 2026.
1 recurso en línea (1898 páginas): mapas, diagramas, ilustraciones a blanco y negro; 30 MB. -- (Colección Divulgación)
Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo, notas a pie de página e índice.
ISBN 978-607-2627-95-6 (PDF)
1. Ecología política 2. Recursos naturales -- Aspectos políticos 3. Medio ambiente 4. Ecología humana 5. Justicia ambiental I. Vaccaro, Ismael, comp, II. Buda, Gabriela, comp. III. Durand, Leticia, comp. IV. Perramond, Eric, comp. V. Ser.

Esta obra fue dictaminada por evaluadores externos a
El Colegio de San Luis por el método de doble ciego

Primera edición: 2026
Crédito de imagen de portada: Frances Paola Garnica Quiñones
Diseño de la portada: Dulce María Avendaño Vargas
Coordinación académica: Gabriela Buda Arango
Corrección y formación editorial: Dulce María Avendaño Vargas
Dirección de traducción: Gabriela Buda Arango.
Lectura control: Gabriela Buda Arango, Mariana Candido dos Santos y Javier Osvaldo Rubio Ritchie
Revisión Técnica: Mariana Candido dos Santos, Javier Osvaldo Rubio Ritchie
Traductoras principales: Adriana Toledano y Diana Caicedo.
Revisión y corrección de traducciones: Ismael Vaccaro, Leticia Durand y Gabriela Buda
Traducción de Beebe y Wheeler, 2012: Laura Alonso Hernández y Noelia García Rodríguez
Traducción de Franklin y Osborne, 2017: Alba Mielgo Davies y Noelia García Rodríguez
© Por la edición: Ismael Vaccaro, Gabriela Buda Arango, Leticia Durand y Eric P. Perramond
© Todos los textos son propiedad de sus autores
© D.R. El Colegio de San Luis
Parque de Macul 155
Fracc. Colinas del Parque,
San Luis Potosí, S.L.P., 78294
ISBN: 978-607-2627-95-6 (pdf)

Hecho en México

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Tienes libertad para:
1. Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
2. El licenciante no puede revocar estas libertades siempre y cuando respete los términos de la licencia.

Bajo las siguientes condiciones:
1. Atribución: debe citar adecuadamente la fuente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado modificaciones. Puede hacerlo de cualquier forma razonable, pero no de manera que sugiera que el licenciante le respalda a usted o a su uso.
2. Sin fines comerciales: no puede utilizar el material con fines comerciales.

ÍNDICE

Introducción 12
Ismael Vaccaro, Leticia Durand y Gabriela Buda

Sección A: Creando un campo

1. La Propiedad y la Ecología Política 36
Eric Wolf

2. El medio ambiente y acceso a los recursos en África 42
Piers Blaikie

3. Ecología política. Una agenda de investigación emergente en los estudios del tercer mundo 82
Bryant, Raymond L.

4. Ecologías Políticas Postconstructivistas 135
Arturo Escobar

5. La territorialidad humana: una evaluación ecológica 166
Rada Dyson-Hudson y Eric Alden Smith

6. El programa de investigación de Ecología Histórica 210
William Balée

7. Genealogías de la confusión en la teoría de la propiedad: de las montañas comunales de los pirineos a los comunes ambientales, políticos y digitales 256
Ismael Vaccaro y Oriol Beltran

Sección B: Conceptos analíticos clave alrededor del Estado y el Mercado como factores disruptivos básicos

8. El retorno a la Economía Moral … para el estudio de los Movimientos Campesinos Transnacionales del Siglo XXI 297
Marc Edelman

9. Algunas genealogías intelectuales para el concepto de resistencia cotidiana 341
K. Sivaramakrishnan

10. Certezas deshechas: cincuenta turbulentos años de antropología jurídica, 1949-1999 369
Sally Falk Moore

11. Espacializando los estados: hacia una etnografía de la gobernabilidad neoliberal 406
James Ferguson y Akhil Gupta

12. Ignorancia, conocimiento y poder: el corte de la madera, el tráfico ilegal y las políticas forestales en méxico 445
Andrew S. Mathews

13. Economía política de los derechos de propiedad cambiantes: el desmantelamiento de un patrimonio pastoral comunal 495
Jean Ensminger y Andrew Ruttan

14. El Estado y sus márgenes: Etnografías comparadas 532
Veena Das y Deborah Poole

Sección C: Introduciendo la subjetividad en el análisis y sus consecuencias para la justicia ambiental. Las políticas de la representación

15. Historias falsas de los bosques y análisis sociales cómplices: Repensando algunas narrativas ambientales de África occidental 574
James Fairhead y Melissa Leach

16. El conocimiento ecológico y tecnológico del fuego:
Aborígenes versus guardabosques en el Norte de Australia 607
Henry T. Lewis

17. Siguiendo a la vegetación invasora en la India,
o por qué nuestros paisajes nunca han sido modernos 650
Paul F. Robbins

18. Empoderando el lugar: multilocalidad y multivocalidad 701
Margaret Critchlow Rodman

19. Un río nos atraviesa 736
Brett Williams

20. Repensando el racismo ambiental:
el privilegio blanco y el desarrollo urbano en el sur de California 790
Laura Pulido

21. Avanzar en una ecología política
de los discursos medioambientales globales 853
Neil W. Adger

Sección D: Cuestiones teóricas-metodológicas. Grandes debates

22. La nueva ecología y las ciencias sociales:
¿Qué horizontes hay para una articulación fructífera? 906
Ian Scoones

23. Hacía una ecología política urbana de justicia energética:
el caso de la energía solar de azotea en Tucson, AZ 957
Remington Franklin y Tracey Osborne

24. Los pueblos indígenas y la política medioambiental 1004
Michael R. Dove

}

25. Incorporando el conocimiento y el comportamiento locales de los pescadores a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el diseño de las Áreas Marinas Protegidas en Oceanía 1038
Shankar Aswani y Matthew Lauer

Sección E: Ecología política y teoría feminista

26. Mujeres, hombres y árboles: Género, poder y propiedad en paisajes forestales y agrarios 1086
Dianne Rocheleau y David Edmunds

27. ¿Disciplinando a las mujeres? El arroz, la mecanización y la evolución de las relaciones de género mandinka en Senegambia 1138
Judith Carney y Michael Watts

28. Nutriendo a las mujeres: hacia una ecología política feminista de la agricultura apoyada por la comunidad en Estados Unidos 1181
Lucy Jarosz

29. Las mujeres y la política del lugar 1218
Wendy Harcourt y Arturo Escobar

Sección F: Temas

F.1. La vida social de las cosas y las cadenas productivas

30. La Metrópolis: La infraestructura del antropoceno 1234
Gastón Gordillo

31. Tras la pista del ejote global: consideraciones metodológicas en la etnografía multisituada 1277
Susanne Elizabeth Freidberg

32. Introducción: las mercancías y la política del valor 1306
Arjun Appadurai

33. Clasificar las mercancías:
cómo se crea valor capitalista a través de los regalos 1385
Anna Tsing

F.2. Conservación

34. Ecología política de la conservación de la fauna salvaje
en la zona del monte Meru del noreste de Tanzania 1421
Roderick Neumann

35. Pueblos y Parques: el impacto social de las áreas protegidas 1452
Paige West, James Igoe y Dan Brockington

36. Ecologismo radical estadounidense
y la conservación de la naturaleza: Una crítica tercermundista 1504
Ramachandra Guha

37. Hacia una crítica sintética de la conservación neoliberal
de la biodiversidad 1522
Bram Büscher, Sian Sullivan, Katja Neves, James Igoe y Dan Brockington

F.3. Extractivismo

38. Empresas mineras, comunidades indígenas y Estado:
La ecología política del litio en Chile (Salar de Atacama)
y Argentina (Salar de Olaroz-Cauchari) 1565
Hans Gundermann y Félix Malte Dorn

39. Resistencia a los proyectos mineros canadienses en México:
lecciones del ciclo de vida de la mina San Xavier en San Luis Potosí 1607
Darcy Tetreault

40. El retorno de la minería a la Europa rural:
de transiciones energéticas, zonas de sacrificio y conservación 1650
Camila del Mármol e Ismael Vaccaro

F.4. Nuevos temas (agua, Antropoceno, soberanía alimentaria, cambio climático)

41. Agua neoliberal vs agua posneoliberal:
Geografías de privatización y resistencia 1689
Karen Bakker

42. Ecología Política Ciudadana:
Una comunidad de praxis para el cuidado de la tierra 1709
Tracey Osborne

43. Explicar la vulnerabilidad diferencial ante el cambio climático:
una revisión desde las ciencias sociales 1748
Kimberley Thomas, R. Dean Hardy, Heather Lazrus,
Michael Mendez, Ben Orlove, Isabel Rivera-Collazo, J. Roberts Timmons,
Marcy Rockman, Benjamin P. Warner y Robert Winthrop

44. El País de Oro: la política del paisaje en las zonas exurbanas
del condado de El Dorado, California 1803
Craig Beebe y Stephen M. Wheeler

45. Caminos diabólicos en el desierto y peleas de gatos en el río:
una ecología política posthumanista del control fronterizo
en la colindancia México - Estados Unidos 1842
Juanita Sundberg

Sección G. Créditos de reproducción y traducción

Licenciamiento explícito para los artículos
que lo solicitaron 1887

Introducción

Ismael Vaccaro, Leticia Durand
Gabriela Buda y Eric Perramond

I. Ecología Política: Sociedades, economía política y el ambiente

La Ecología Política (EP) no es una disciplina *per se*. Se trata más bien de un marco analítico que hace uso de teorías diversas y que es aplicado en diversas disciplinas como la antropología, la geografía o la sociología, por investigadores interesados en el análisis de problemas socioambientales. La EP observa el ambiente como un escenario donde diversos actores sociales, con poder político y económico asimétrico, compiten por el acceso y control a los recursos naturales y otros elementos del entorno. Esta sencilla definición delimita con nitidez algunas de las características básicas de los desarrollos teóricos que aporta la EP: 1) A la par, la naturaleza puede ser comprendida como tal (como ambiente) y como una serie de recursos naturales susceptibles de ser utilizados por los seres humanos. Esta conexión conceptual nos habla de percepción y de economía y usos de la naturaleza; 2) Por añadidura, al introducir el concepto de actores sociales, se abre la puerta para hablar de disputas entre individuos y grupos, y valorar las percepciones y construcciones de lo natural y lo económico por parte de estos agentes diferenciados, reconociendo la importancia de la subjetividad y del contexto cultural; 3) Se habla de acceso y control de esos recursos y, por lo tanto, se trata de las formas de propiedad y de la capacidad de excluir e incluir a otros agentes al uso de esos recursos; 4) Comprende al poder político como asimétrico, y enfatiza la idea de disputa señalando que los conflictos ambientales, en gran parte, son también conflictos políticos.

Este marco de investigación conecta, de una forma fundamental, en un solo proceso analítico, lo natural y lo social. Así, la EP es un campo que, debido a su inherente interdisciplinariedad metodológica y teórica, recibe contribuciones desde la antropología, la geografía, la ecología o las ciencias políticas entre otras disciplinas.

Esta definición también nos ofrece pistas para entender el desarrollo histórico de la EP y su heterogeneidad teórica. En sus inicios, la EP fue promovida por académicos interesados en entender cómo se distribuían los recursos y como esa repartición generaba desigualdades y problema ecológicos importantes. Estos investigadores se centraron en la primera parte de la definición: en entender cómo los elementos del entorno se convertían en recursos naturales, y en quien lograba monopolizar su control. Esta primera EP, desde una perspectiva teórica materialista, se despliega como una economía política de los conflictos medioambientales muy centrada en el análisis de los factores estructurales como determinantes en la relación de los grupos sociales con su ambiente. En un segundo momento, los practicantes de la EP empiezan a interesarse por la parte central de la definición: la necesidad de identificar y entender el papel de los diferentes actores sociales implicados en las disputas ambientales en cuestión. Esto da lugar a postulados más post-estructurales, donde el subjetivismo y el proceso de construcción de las narrativas que vehiculan y explican la acción social ganan protagonismo. Ya entrado el siglo XXI, la ecología política es influenciada por el posthumanismo y el giro ontológico. Busca superar las dualidades modernas y reconsiderar la naturaleza como una categoría independiente de la interacción social. Este enfoque rechaza la separación entre lo humano y lo no humano, y explora cómo diversas entidades colaboran en la creación continua del mundo, asignando agencia a lo no humano.

Desde una perspectiva metodológica estas características apuntan a la obligatoriedad de: 1) una aproximación histórica a la comprensión de las disputas ambientales y 2) a la necesidad de una aproximación multiescalar, asumiendo que en un mundo tan densamente interconectado como el nuestro, las causas de los procesos que se estudian no necesariamente radican en la inmediata vecindad de las zonas donde se produce el conflicto si no

que, políticas promovidas desde miles de kilómetros o actores representando gobiernos extranjeros o empresas globales pueden tener un papel fundamental en la comprensión de un cambio ecológico muy localizado en el espacio. El foco en la diversidad de actores sociales impone también una aproximación al estudio de los conflictos que, como paso preliminar, identifica siempre a las partes implicadas para estudiarlas individualmente y en relación con los otros actores y el ambiente.

II. Organización del volumen

Aquí proponemos una colección de 45 artículos traducidos al español relevantes para la EP a nivel internacional, a fin de acercar a los lectores de habla castellana a la ecología política que se desarrolla en países angloparlantes.[1]

Este compendio intenta contribuir a la difusión de la EP producida en países del Norte en el ámbito latinoamericano y aportar elementos para enriquecer las comprensiones sobre luchas para mantener o recuperar territorios ancestrales, las consecuencias de la omnipresencia de las industrias extractivas y la dependencia económica, el papel del Sur Global en las cadenas de suministro de recursos naturales de importancia global y las vías para la conservación de los ecosistemas. Esperamos con este libro, que el trabajo de altísima calidad que académicos latinoamericanos están realizando pueda verse beneficiado al acercar a estudiantes, activistas e investigadores, a textos clásicos de la EP contemporánea que se produce en el Norte y que, en su mayoría, aún no están disponibles en castellano. Las variantes regionales de la ecología política, como la anglosajona, la francesa o la latinoamericana difieren en su historia, los intereses teóricos, y los problemas que atienden y que son más preocupantes en cada región, no obstante, el diálogo y la colaboración podrá facilitarse al poner a disposición trabajos relevantes, bajo esquemas de libre acceso y en los idiomas de cada región.

1 Cuando ha sido posible, se han traducido también las figuras, tablas y mapas. En algunos casos, debido a las limitaciones de las imágenes originales, o a que se ha considerado que se debía respetar el formato inicial, se ha mantenido el formato original.

Esta colección, sin embargo, no es un compendio clásico de artículos traducidos. Está diseñado para ser o estructurar, un curso que puede ser introductorio o hasta avanzado de EP. Hemos organizado la selección de trabajos a lo largo de seis secciones: A. Creando un campo, que nos presenta una secuencia histórica que expone a los lectores al desarrollo de esta disciplina, B. Conceptos analíticos clave alrededor del Estado y el Mercado como factores disruptivos básicos y ejes centrales de análisis de la EP, C. Introduciendo la subjetividad en el análisis, en la que se abordan las disputas simbólicas alrededor del poder; D. Cuestiones teóricas-metodológicas en dónde se presentan algunos de los debates teóricos clásicos de la EP, E. Ecología Política y feminismo, para señalar las contribuciones de la teoría feminista a la EP y F. Temas, en dónde incluimos los aportes de la EP a la práctica con una selección de artículos centrados en algunos temas concretos de investigación: i. la vida social de las cosas y las cadenas productivas, ii) conservación y iii) extractivismo y iv) nuevos temas.

No todos los artículos son estrictamente de EP, pero todos ellos contribuyen a entender cómo esta disciplina se ha desarrollado y cómo estudia el mundo compuesto por una compleja amalgama de procesos socio-ecológicos. Valdría la pena añadir antes de presentar en concreto las seis secciones en las que se divide este compendio, que la selección que presentamos, en parte, ha estructurado con éxito un curso avanzado de EP durante más de una década. Decimos en parte porque la selección original ha sido afectada por la voluntad, o la falta de ella, de las grandes editoriales académicas de ceder los derechos de publicación de sus artículos para un proyecto como este, decididamente sin ánimo de lucro y de acceso abierto. En otras palabras, algunos clásicos que deberían estar no están debido al coste que suponía conseguir los derechos de traducción. Todos los artículos y capítulos que presentamos fueron cedidos gratuitamente o por una cuota simbólica por los detentadores de sus derechos. Y vaya con ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Sección A: Creando un campo

En esta primera sección tiene un doble objetivo. Por un lado, presenta artículos que nos ayudan a entender la situación teórica antes de la irrupción de la EP y, por el otro lado, incluye varias piezas fundacionales que, a través de los años, han intentado formalizar definiciones de lo que era o debía ser la EP.

Estas piezas históricas nos permiten, a la vez, entender el desarrollo histórico del campo e identificar las limitaciones o ventajas que cada momento teórico supuso. Empezamos con un breve artículo de Eric Wolf de 1972 donde se menciona por primera vez el concepto de ecología política. Wolf, lo hace desde la perspectiva de la antropología ecológica, ámbito de largo recorrido histórico, que él practicaba. Es una referencia indirecta pues se habla principalmente de las relaciones de poder articuladas alrededor de las formas de propiedad, pero, en todo caso, abre la puerta a repensar las relaciones entre lo social y lo ecológico.

Acompañamos esta primera referencia a la EP, con tres textos ya claramente dedicados a un campo emergente (o consolidado, dependiendo del momento histórico). Empezamos con el artículo fundacional de Blaikie (1989) donde se ponen de manifiesto las relaciones entre acceso a los recursos naturales y el impacto de la erosión, tan importante en ese momento para los académicos y funcionarios dentro del ámbito del desarrollo en África, caracterizado por las interacciones complejas entre movimientos migratorios, políticas coloniales y postcoloniales de expropiación. Esta escuela, la del estudio de las causas y las consecuencias sociales y ecológicas de la degradación en África constituirá un componente clásico de la EP durante muchos años. Raymond Bryant y otros autores dedicaron muchos esfuerzos, a principios de la década de los noventa, a formalizar y difundir la EP. De esa época data un número importante de libros y artículos que intentan moldear a este nuevo campo. Es en este momento cuando la EP se formaliza con la fundación de una revista y el establecimiento de conferencias y asociaciones dedicadas a su promoción. Para representar esta época presentamos un artículo de Bryant de 1992.

Finalmente, para cerrar esta subsección de textos que definen la disciplina, incluimos un artículo relativamente reciente de Arturo Escobar (2010), que describe el itinerario teórico de tres fases en el desarrollo de la EP. Desde un comienzo muy materialista, con un fuerte predominio de la economía política, a una primera transición post-estructural que integra decididamente la subjetividad como campo de estudio, hasta la entrada, mucho más reciente, del giro ontológico a la EP. Esto no quiere decir que cada nuevo desarrollo haya reemplazado al anterior. La EP que se practica en la actualidad, es extremadamente diversa, e incluye preocupaciones y conceptos que se desarrollaron en cada una de las tres fases propuestas por Escobar.

Como indicamos al principio de esta introducción, el segundo objetivo de esta sección es presentar cómo estaba el escenario teórico en las ciencias sociales cuando emergió la EP, de qué materiales, si se quiere, surgió. Este contexto proveyó las condiciones de producción de la EP y es fundamental para entender sus características. Todo intento de resumir una época está condenado al fracaso o, como mínimo, a una simplificación casi caricaturesca, pero, de todos modos, vamos a intentarlo. A finales de los años setenta y principios de los ochenta nos encontramos con un nutrido grupo de académicos de diferentes disciplinas analizando temas esencialmente socio-ecológicos que desde una aproximación unidisciplinaria tenían difícil solución.

En ese momento tenemos a la antropología ecológica, la teoría de la propiedad, la economía política, los teóricos del sistema mundo, los estudios del desarrollo y la ecología histórica estudiando, de diferentes maneras, la relación entre los recursos naturales y las sociedades humanas. En un momento dado, identificando las propias debilidades metodológicas o teóricas y las fortalezas ajenas, estos especialistas empiezan a hablar entre ellos. La antropología ecológica se había especializado en el estudio etnográfico detallado de comunidades aisladas. Los estudios del desarrollo, entre otras cosas, intentaban entender la situación de los modos productivos locales y cómo estos podrían adaptarse o adoptar formas más "modernas" de producción. Los teóricos del sistema mundo estudiaban los flujos económicos y de poder entre naciones. La teoría de

la propiedad estudiaba las diferentes formas de posesión que se daban en el mundo. La ecología histórica y la historia medioambiental intentaban entender la configuración de los paisajes. En cierta forma, cada una de estas escuelas ofrecía algo que todas las otras necesitaban y adolecían de alguna cosa que las otras aportaban. A unos les faltaba la comprensión de las interacciones que cualquier lugar tiene con otros sitios y que no pueden ser estudiadas de manera aislada. A los otros les faltaba la capacidad de entender las relaciones microsociales que se daban en los lugares de extracción. La ecología política emergió de los esfuerzos que académicos de todas estas escuelas hicieron para aprender de otros campos y generar, de manera interdisciplinar, un marco analítico más holístico que, de manera enfática conectaba las relaciones entre grupos humanos y el paisaje, con una visión decididamente histórica y multi-escalar.

En esta sección también hemos incluido un artículo de Dyson-Hudson y Smith (1978) que relaciona las características de los recursos naturales con las formas de organización política que maximizan su uso. Un resumen producido por Balee (2006) de la agenda analítica de la historia ecológica y un artículo de Vaccaro y Beltran (2019) que resume críticamente parte de la historia conjunta de la teoría de los regímenes de propiedad y la teoría de la acción colectiva utilizando los Pirineos como contexto etnográfico.

Hay, por supuesto, multitud de trabajos que podrían ser incluidos en esta sección (así como en las que siguen), pero apremiados por el espacio disponible y la limitación de recursos disponibles para traducciones nos hemos decidido por esta pequeña muestra.

Sección B: Conceptos analíticos clave alrededor del Estado y el Mercado como factores disruptivos básicos.

La EP, como hemos apuntado, se centra en el estudio de las disputas ambientales, enfatizando las dinámicas sociales de dichos problemas: sobreuso, enfrentamiento entre actores con diferentes prioridades de manejo, marco político o proceso histórico, etc. En la mayoría de los casos estamos hablando de las dramáticas transformaciones promovidas por el

advenimiento de la modernidad a todos los rincones del globo: una modernidad entendida en el sentido propuesto por Karl Polanyi en *La Gran Transformación* (1944), donde la define como la transformación generada por la llegada y consolidación del estado y el mercado.

Una parte muy importante de la EP se ha centrado en estudiar las consecuencias del choque entre lo estatal y lo capitalista, lo burocrático y la explotación masiva, con las formas de vida prevalecientes antes de la expansión europea o del mercantilismo urbano. Este proceso ha dado lugar, inequívocamente a situaciones de desempoderamiento local y expropiación de recursos por parte de los actores más fuertes (por lo general, asociados a representantes del estado y de las grandes empresas). Para acercarse a estos procesos que, aunque se desarrollan alrededor de elementos naturales del paisaje, son eminentemente políticos, la EP se ha apoyado en conceptos que no le son exclusivos. En esta sección, que podría incluir docenas de textos, hemos decidido centrarnos en artículos que iluminan varios conceptos capitales para el análisis de esta interacción del estado y el mercado con los paisajes socio-ecológicos preexistentes.

Se discute la idea de economía moral y de cómo cada disputa ambiental es a menudo también, un conflicto entre dos o más maneras de pensar sobre qué es lo correcto con relación al uso y explotación de la naturaleza: minería o agricultura, extracción a gran escala hasta el agotamiento de un recurso o uso sustentable de cantidades suficientes para el uso local, diversificación o monocultivo, etc. Para introducir la idea de la economía moral hemos seleccionado un artículo de Edelman (2005) publicado en un número especial de la revista *American Anthropologist* dedicado a homenajear la carrera del politólogo James Scott que, siguiendo la estela de Polanyi y E.P. Thompson, se dedicó a conectar la economía política con las subjetividades culturales. De ese mismo número hemos incluido un artículo de Sivaramakrishnan (2005) para hablar de la resistencia cotidiana, donde la economía moral se conecta con el estudio de las prácticas diarias de Michel de Certeau.

Como el estado (y siguiendo sus pasos, también el mercado), se despliega a través de la ley, nos ha parecido fundamental traer a colación

la idea del pluralismo legal: la convivencia, articulada o en conflicto, de diferentes sistemas legales, formales o informales. Los conflictos entre diversas economías morales a menudo necesitan ser interpretados también a través de los códigos legales de los actores enfrentados. El artículo de Falk-Moore, publicado en 2001, nos ofrece un resumen de la evolución de la antropología legal hasta ese momento, con especial énfasis en el legalismo plural.

Todas estas actividades de control y extracción promovidas por estados y agentes económicos de grandes dimensiones ocurren en el paisaje y tienen un componente espacial fundamental. La pieza de Ferguson y Gupta (2002), aquí incluida, brinda elementos para reflexionar sobre la gestión del espacio que implementa el estado neoliberal y su gubernamentalidad, en el sentido Foucaultiano del término. Obviamente, esta territorialización del espacio controlada por el Estado ocurre de la mano de la ley (conexión con el legalismo plural) y genera resistencias locales (conexión con economía moral y resistencia diaria). Finalmente, como no podía ser de otra manera, esta expansión de la modernidad ocurre bajo el manto de legitimidad producido por el conocimiento de expertos reconocidos por los estados como legítimos (Mathews 2006).

Es importante señalar, como lo hacen algunos de los artículos seleccionados para esta colección, la relevancia de evitar descripciones simplistas de procesos que son extremadamente complejos. Si bien es cierto que en una situación pre-mercado y pre-estado, a nivel económico la mayoría de las personas se comportará de forma parecida, cuando las condiciones cambian, cuando se pueden vender cosas y no todo es para consumo propio, cuando a uno le pagan por recursos que nunca habían tenido valor, entonces, como es lógico, diferentes individuos se comportan de manera diferente. Ensminger y Ruttan (1991) y Vass y Poole (2004) nos presentan diferentes situaciones que ocurren al margen de los sistemas nacionales, donde distintos actores "locales", frente a una situación nueva, optan por comportamientos económicos diversos y a veces contradictorios u opuestos.

Sección C: Introduciendo la subjetividad en el análisis y sus consecuencias para la justicia ambiental. Las políticas de la representación

Volvamos a la definición de la EP que hemos avanzado a principios de esta introducción: "la ecología política se acerca al ambiente como si se tratara de un escenario donde diversos actores sociales, con poder político y económico asimétrico, se disputan el acceso y control a los elementos del entorno." Esta definición nos apunta a todas las tendencias o ramas que la EP ha ido desarrollando. Una de las más importantes muestra que estudiar y entender las creencias, los discursos y las narrativas de los actores involucrados en cada disputa ambiental, es fundamental para comprender su desarrollo.

Esta sección ofrece una selección de artículos que muestran cómo, por ejemplo, los prejuicios de científicos y políticos han sido claves para entender el diseño final de políticas de gestión que han marginalizado a las poblaciones locales (Fairhead y Leach 1995; Lewis 1989; Robbins 2001). Procesos en los que a menudo se ha demostrado a posteriori que el conocimiento y las prácticas de gestión locales eran de hecho adecuadas para el paisaje en cuestión. El artículo de Rodman (1992) nos acerca a una discusión conceptual y metodológica importante sobre la subjetividad, a la necesidad de comprender las implicaciones de la multivocalidad o la presencia de diferentes actores en todo conflicto cuyas voces deben ser consideradas.

Williams (2001) nos ofrece dos casos en los que se despliega una de las grandes contribuciones metodológicas de la EP para el análisis de las disputas ambientales que a menudo atraen la atención del investigador hacia el problema inmediato, sus causas y soluciones. No obstante, como asevera Blaikie para el caso de la erosión del suelo, su comprensión requiere una detallada aproximación histórica, pues las causas pueden hallarse en elementos difíciles de observar en el paisaje contemporáneo. El artículo de Williams ofrece un gran ejemplo del estudio histórico detallado de una situación, que permite entenderla en toda su complejidad.

El artículo de Williams, junto al de Laura Pulido (2000) que también incluimos, nos acercan a la idea de Justicia Ambiental. Cuando se pone el foco en los actores involucrados en un conflicto y en las narrativas que producen, uno no puede evitar reconocer los patrones que someten a unos y empoderan a otros (a menudo siempre los mismos). Es a través de este análisis por actores y de las fuentes de su conocimiento, poder y prioridades (su subjetividad y contexto), que también podemos discutir la idea de (in-)justicia ambiental.

El trabajo de Adger (2001) ofrece una nueva vuelta de tuerca en el estudio de la emergencia y construcción de narrativas ambientales. En este caso, el autor se aleja de la realidad local, para centrarse en discursos de alcance global.

Sección D: Cuestiones teóricas-metodológicas. Grandes debates

El desarrollo de la EP, como el de cualquier campo o escuela de pensamiento, no ha estado exento de debate y confrontación. En esta sección presentamos artículos que reflexionan sobre cinco dilemas que han articulado y enriquecido el desarrollo teórico de la disciplina. El artículo de Escobar que incluimos en la primera sección ya apunta a algunos de estos momentos clave para el avance de la EP.

En sus inicios la ecología política tuvo un carácter marcadamente materialista, con explicaciones centradas en los rasgos estructurales de la sociedad. Muchos de sus primeros practicantes vienen de la economía política aplicada al estudio de los recursos naturales y prefieren un marco analítico con datos objetivos. No obstante, el auge del post-estructuralismo en las ciencias sociales y las humanidades, y respondiendo a la necesidad de entender a los actores que participan en los procesos estudiados (y no siempre de una manera "racional" o siguiendo criterios de uso "objetivos"), se introducen la subjetividad y el análisis de actores y sus mecanismos de resistencia al poder, como elementos legítimos de análisis.

En esta fase, la EP rápidamente incorpora teoría y conceptos de corte post-estructural (o constructivistas siguiendo el lenguaje de Escobar). Dado que el foco se encuentra en la interpretación y la construcción de la realidad, buena parte de la EP política acaba centrándose en el estudio casi exclusivo de lo social en detrimento de lo ecológico. En este sentido, incluimos un artículo de Scoones (1999) donde expone la necesidad de prestar atención a las posibilidades de la ecología. La nueva ecología, nos dice Scoones, no es una disciplina anclada en una visión estática de la realidad como a veces parecen sugerir de forma un tanto simplista los científicos sociales, y tiene capacidad para estudiar el cambio dinámico en el que se implican los sistemas socio-ecológicos.

Como ya hemos comentado, inicialmente la gran mayoría de los estudios que utilizan la EP como marco analítico se centran en casos africanos y, en menor medida en Latinoamérica y Asia. En este período se sobreentiende que la EP es un marco analítico para lo que entonces se llamaba el tercer mundo (en otros momentos también referido como el mundo subdesarrollado, el mundo postcolonial, o el sur global). De hecho, uno de sus manuales clásicos, escritos por Bailey y Bryant en 1997, se titula *Third World Political Ecology*. Lentamente, sin embargo, empiezan a levantarse voces que afirman que a menudo los problemas ecológicos en el primer mundo están tan relacionados con las desigualdades políticas como en el tercer mundo. Este desarrollo no es trivial a nivel teórico. Mientras la EP se restringía al mundo postcolonial no era difícil imaginar que cualquier problema de desigualdad e injusticia ambiental se debiera a la herencia colonial. Sin negar que eso sea relevante en la mayoría de los casos, al expandir el campo de análisis a las zonas rurales de occidente, se abrió otra posibilidad más compleja. Muchas zonas rurales de occidente y sus poblaciones, en algún momento dado, habían sido tratadas de la misma forma en que lo estaban siendo algunos lugares del sur global. Aquí la causalidad parecía pues, desplazarse de la herencia colonial a la tensión entre lo urbano y lo rural, entre las zonas de extracción a las zonas de consumo, entre los centros de poder y las áreas periféricas.

Una consecuencia directa del debate anterior fue la necesidad de repensar también, las características de los lugares de investigación. Hasta ese

momento casi la totalidad de la investigación de la EP se había centrado en zonas rurales. Parecía necesario expandir el esfuerzo de investigación al mundo urbano. Para ofrecer un ejemplo de esta inclusión de lo urbano en el foco analítico de la EP hemos incluido aquí a Franklin y Osborne (2017).

Finalmente, como contrapunto al tema de los expertos que hemos introducido en la sección previa, se hace necesario hablar del papel que el conocimiento indígena y el saber local pueden o deben tener en el análisis de la EP. Aquí incluimos dos artículos (Dove 2006; Aswani y Lauer 2006) que reflexionan sobre las contribuciones y la necesidad de reconocer y valorar el conocimiento local y su potencial de diálogo con la ciencia de raíz occidental.

Sección E: Ecología política y teoría feminista

Esta sección ha sido creada para enfatizar el impacto que la teoría feminista ha tenido en la EP en particular (y en el post-estructuralismo en general). La teoría feminista ha contribuido como pocas a la incorporación de la subjetividad y la posicionalidad de los sujetos en el estudio de los procesos sociales.

En otras palabras, la teoría feminista ha sido clave para el estudio sobre los procesos socio-ecológicos, no solo porque ha revelado las diferentes formas en que mujeres y hombres interactúan con el paisaje y sus recursos, y como debido a esto son afectados diferencialmente por los procesos de cambio que estudiamos, sino también porque ha ayudado a legitimar el análisis del contexto para entender las acciones y narrativas de todos los sujetos.

En el campo exclusivo de la EP y su acercamiento a los cambios socio-ecológicos, hemos seleccionado dos artículos (Rocheleau y Edmunds 1997; y Carney y Watts 2001) que estudian esta forma diferente que tienen hombres y mujeres de interactuar y construir el paisaje, formas que establecen parámetros para la economía doméstica cuyo equilibrio se trastoca cuando el paisaje es alterado. A menudo, se pone énfasis en la política y la economía del hogar, y en cómo las estructuras de poder de género

en las comunidades influyen en el impacto diferenciado que tienen los cambios (como la llegada de proyectos de desarrollo, el cambio climático, las transiciones demográficas o las políticas públicas) en hombres y mujeres. En el texto de Jarosz (2011) el foco se sitúa en las actividades de grupos de mujeres en Estados Unidos y su participación en proyectos de agricultura alternativa.

La EP ha dedicado también mucho tiempo a entender cómo el lugar concreto (*place* en inglés) se diferencia del espacio abstracto (*space*): comprendiendo el lugar como el territorio donde se vive y al que la experiencia dota de significados y nombres. Al contrario, el espacio se define como un lugar casi abstracto, un punto en el mapa sin ataduras o significado personal o colectivo. Las dinámicas de género y sus diferentes aproximaciones a la construcción del lugar son también objeto de atención de la EP. En esta dirección, incluimos a Harcourt y Escobar 2002.

Sección F: Temas

Para completar esta colección hemos seleccionado un par de temas específicos para ofrecer algunos ejemplos de cómo la EP se acerca de formas distintas a problemáticas específicas. En este caso hemos seleccionado el estudio de las cadenas productivas (*commodity chains* en inglés) y la conservación. Incluimos también un conjunto final de artículos que tocan algunos nuevos (y no tan nuevos) temas de la EP.

F.1. La vida social de las cosas y las cadenas productivas

En un mundo globalizado y tan interconectado como el nuestro, el estudio de las cadenas productivas ha devenido en un campo de análisis extraordinariamente fértil y atractivo para la comprensión de procesos extremadamente complejos. Las cadenas productivas están constituidas por redes de extracción, producción, distribución y consumo; es decir lugares y personas que con su trabajo (físico y también cultural) producen mercancías.

Las cadenas productivas son un ejemplo paradigmático de procesos socio-ecológicos de localización múltiple pues la extracción, la transformación, la distribución, el consumo y el deshecho ocurren en lugares diferentes, a menudo en continentes distintos. La existencia de estas redes, en todo caso, conecta estos lugares y gentes, y lo que ocurre en un lugar tiene efectos dominó por toda la red. Estas redes, además, no existen aisladas unas de otras. El incremento de precio o el colapso de una mercancía en cierto sitio puede afectar a la cadena de producción de una mercancía similar al otro lado del planeta.

Appadurai (1994) habla de la vida social de las cosas para referirse a las potencialidades que adquieren en su proceso de transformación. Los objetos y elementos pasan de ser materiales sin consideración alguna para los actores económicos, a elementos valorados y sujetos a extracción, transporte, transformación, consumo local e internacional y deshecho, hablamos así de la vida social de las cosas.

Esta sección tiene dos tipos de artículos: los estudios de caso de Gordillo sobre la metrópolis (2018) y Friedberg sobre los ejotes africanos (2001), y dos piezas teóricas: los textos clásicos de Appadurai (1994) y Tsing (2013).

F.2. Conservación

La conservación de la naturaleza mediante áreas protegidas (AP) ha sido un tema atendido por la EP desde sus inicios. Las AP son proyectos políticos de presencia territorial precisa que acostumbran a consolidar la presencia del estado y sus expertos en sus zonas periféricas. La implementación de estos proyectos, diseñados para transformar los regímenes de propiedad, los usos, y la gobernanza de un territorio, suele tener consecuencias importantes para las formas de vida de las comunidades humanas afectadas por ellas, dando lugar en muchos casos a disputas ambientales. Durante su creación se definen claramente los grupos que van a gestionar la política pública y los que estarán sujetos a ellas, esto es, los agentes del estado y las poblaciones locales. Así, la creación y gestión de una AP es también un ejercicio de poder.

La gestión misma de estas áreas, su gobernanza, el manejo de los recursos naturales protegidos y, en consecuencia, de las poblaciones humanas ubicados al interior o alrededor de los parques es un objeto clásico de investigación de la EP (Neumann 1992; West et al. 2006). En estos trabajos clásicos, se discute el papel de las AP en la conservación de la biodiversidad, los mecanismos a través de los cuáles son instrumentadas, y los procesos de participación y exclusión de los actores en la gestión de éstas.

Desde otros ámbitos de la EP se estudia la ideología (y la economía política) que hay detrás del ambientalismo y los diferentes formatos de gobernanza (fortaleza, participativa, o neoliberal) que se han utilizado para promover la conservación (Guha 1989; Büscher et al. 2011).

F.3. Extractivismo

En un compendio sobre ecología política para Latinoamérica no podía faltar una sección sobre extractivismo. La minería es un ejemplo paradigmático de disrupción repentina y radical de un paisaje y sus sistemas socioecológicos. Es también un ejemplo clásico de un proceso de impacto local que nace de las necesidades y decisiones de instituciones políticas, empresas y masas de consumidores muy alejadas de las zonas de implementación de la actividad extractiva, las llamadas "zonas de sacrificio". Lugares donde el "ciclo de auge y caída" de la actividad productiva viene acompañado por una "violencia lenta" y progresiva.

En esta sección incluimos dos estudios en América Latina, el de Gundermann y Dorn para el litio chileno, y el Tetreault para el oro mexicano. Ambos analizan las interacciones entre la constelación de grupos sociales que se relacionan alrededor de una mina: estado, empresas, grupos indígenas y movimientos sociales. Incluimos también un ejemplo, de Del Mármol y Vaccaro, que analiza las posibles repercusiones para el mundo rural de las transformaciones legales y políticas que promueve la transición energética "verde", una "transición injusta" verde que, en nombre del bien común y basada en objetivos globales, requiere sacrificios localizados.

F.4. Nuevos temas (agua, antropoceno, soberanía alimentaria, cambio climático)

La EP política está en la actualidad experimentando una expansión sin precedentes. Desde ella, hoy en día, se estudian todo tipo de procesos. No queríamos cerrar esta selección sin ofrecer algunos trabajos que apuntan a esta versatilidad de la EP contemporánea: Bakker (2013) para el estudio de la gestión del agua, Osborne (2017) para la práctica de la reciprocidad con el planeta, Thomas *et al* (2018) para el cambio climático, Beebe y Wheleer (2012) para la política del paisaje en un territorio semirural que se encuentra en la periferia de lo urbano y Sundberg (2011) para ejemplificar a la ecología política posthumanista que considera seriamente el papel activo de los no humano en los procesos sociopolíticos.

III. Reflexiones finales

Como se ha mencionado al principio de esta introducción, el objetivo de este compendio de artículos es el de facilitar el acceso, a gente de Latinoamérica que pueda estar interesada en la ecología política, a conocimiento producido en la materia en partes del Norte Global. Esta introducción, sin embargo, sería incompleta sin apuntar que en Latinoamérica existe una larga tradición académica de estudio de las relaciones de poder en los procesos de transformación socioambiental. En esta región del mundo la ecología política encuentra inspiración en autores como Galeano, De Castro, Ribeiro, Dussel, Mignolo, Quijano o Alimonda, entre otros muchos, que destacan las experiencias latinoamericanas del colonialismo, la globalización, el postcolonialismo, la dominación y la pobreza como claves para comprender las dinámicas socioambientales del continente. En este sentido los académicos no han estado solos, la teología de la liberación y varios ideólogos políticos de las independencias americanas han arbolado también la bandera de la injusticia socioambiental.

Así, la ecología política Latinoamérica tiene sus propios referentes teóricos y un fuerte compromiso social desde el que tanto académicos

como activistas, analizan y oponen resistencia al despojo, a la degradación de los recursos naturales y a la erosión de formas particulares de vida. En América Latina, la ecología política es impulsada principalmente por investigadores que laboran en sus naciones de origen, sosteniendo una estrecha conexión con sus territorios y sus movimientos sociales. Con frecuencia, incluso participan como activistas e integran a sus trabajos el conocimiento, las luchas y estrategias de las comunidades que resisten el despojo de sus recursos, la destrucción ambiental y la amenaza a sus modos de vida (Moreano et al., 2017; Alimonda, 2017; Leff, 2017). Aunque estos son rasgos de la EP Latinoamericana, los académicos vinculados a la EP en todas las regiones del mundo tienen perfiles muy diversos, algunos participan como activistas y otros no, pero sus trabajos están siempre permeados por la perspectiva crítica con la que estudian las interacciones entre lo social y lo ambiental.

La ecología política de habla hispana, además, como la anglosajona, es también extremadamente diversa. Destacan nombres como, Martínez Allier autor catalán que proviene de la economía ecológica, Arturo Escobar, quien desde Colombia y Estados Unidos contribuye al campo desde la antropología, el mexicano Enrique Leff desde la filosofía, el uruguayo Eduardo Gudynas a partir de los estudios de desarrollo y la economía, Víctor Toledo quien desde México contribuye a partir de la etnoecología y el sociólogo Héctor Alimonda, desde Brasil, tan solo por mencionar algunos. Los temas estudiados son igualmente diversos. Van desde el impacto de la minería al colapso de las economías de subsistencia, las consecuencias de la implementación de complejos de producción energética, ya sea ésta hidráulica o eólica, o la descolonización de las formas de producción de conocimiento, entre otros muchos. No obstante, a pesar de sus diferencias, el vínculo intelectual de la ecología política con la justicia social y la teoría crítica es un rasgo presente en todas las variantes regionales de la disciplina y que pueden fortalecerse a través del intercambio, la reciprocidad y la difusión de otras ecologías políticas.

Referencias

Adger, Neil W. 2001. Advancing a political ecology of global environmental discourses. *Development and change* 32: 681-715.

Alimonda, Héctor. 2017. En clave de sur: la ecología política latinoamericana y el pensamiento crítico. En: Alimonda, H. Toro Pérez, C. y Martin, F. (coords.) *Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica*. VOL. I. UAM y CLACSO, Buenos Aires, pp.33-49.

Appadurai, Arjun. 1994. Commodities and the Politics of Value. En *The Social Life of Things,* editado por Arjun Appadurai, 3-63. Cambridge: Cambridge University Press.

Aswani, Shankar y Matehew Lauer. 2006. Incorporating fishers' local knowledge and behavior Geographic Information Systems (GIS) for designing marine protected areas in Oceanía. *Human Organization* 65 (1): 80-101.

Bakker, Karen. 2013. Neoliberal versus postneoliberal water: geographies of privatization and resistance. *Annals of the Association of American Geographers* 103 (2): 253-260.

Balée, William. 2006. The Research program of Historical Ecology. *Annual Review of Anthropology* 35:75-98.

Beebe, Craig y Stephen M. Wheeler. 2012. Gold Country: the politics of landscape in exurban El Dorado County, California. *Journal of Political Ecology* 19 (1): 1-16.

Blaikie, Piers. 1989. Environment and access to resources in África Land. *Journal of the International African Institute* 59 (10): 18-40.

Bryant, Raymond L. 1992. Political ecology: an emerging research agenda in Third-World studies. *Political Geography* 11 (1): 12-36.

Büscher, Bram, Sian Sullivan, Katja Neves, James Igoe y Dan Brockington. 2011. Towards a synthesized critique of neoliberal biodiversity conservation. *Capitalism Nature Socialism* 23 (2): 4-30.

Carney, Judith y Michael Watts. 2001. Disciplining women? Rice, mechanization, and the evolution of Mandinka gender relations in Senegambia. *Signs* 16 (4): 651-681.

Veena Das and Deborah Poole. 2004. "State and Its Margins: Comparative Ethnographies." In Anthropology in the Margins of the State, edited by Veena Das and Deborah Poole, 3–34. Santa Fe, NM: SAR Press.

Dyson-Hudson, Rada y Eric Alden Smith. 1978. Human territoriality: an ecological reassessment. *American Anthropologist* 80 (1): 21-41.

Del Mármol, Camila y Ismael Vaccaro. 2020. New extractivism in European rural areas: How twentieth first century mining returned to disturb the rural transition. *Geoforum*, núm. 116,42-49.

Dove, Michael. 2006. Indigenous people and environmental politics. *Annual Review of Anthropology 35*, 191-208.

Edelman, Marc. 2005. Bringing the moral economy back in… to the study of 21st century transnational peasant movements. *American Anthropologist* 107 (3): 331.

Ensminger Jean y Andrew Ruttan. 1993. The politics of changing property rights: dismantling a commons from within. *American Ethnologist* 18 (4): 683-699.

Escobar, Arturo. 2010. Ecologías políticas postconstructivistas. *Revista Sustentabilidades* 2: 02-05.

Falk Moore, Sally. 2001. Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949-1999. *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 7 (1): 95-116.

Fairhead, James y Melissa Leach 1995. False Forest History, Complicit Social Analysis: rethinking some West African Environmental narratives. *World Development* 23 (6): 1023-35.

Felix Malte Dorn y Gunderman, Hans. 2022. Mining companies, indigenous communities, and the state: The political ecology of lithium in Chile (Salar de Atacama) and Argentina (Salar de Olaroz-Cauchari). *Journal of Political Ecology* 29 (1): 341-359.

Ferguson James y Akhil Gupta 2002. Spatializing states: toward an ethnography of neoliberal governmentality. *American Ethnologist* 29: 981-1002.

Franklin, Remington y Tracey Osborne. 2017. Toward an urban political ecology of energy justice: the case of rooftop solar in Tucson, AZ. *Journal of Political Ecology 24*: 1056.

Freidberg, Susanne Elizabeth. 2001. On the trail of the global green bean: methodological considerations in the multi-site ethnography. *Global Networks* 1 (4): 353-368.

Gordillo, Gastón. 2018. The Metropolis: The Infrastructure of the Anthropocene. En *Infrastructure, Environment and Life in the Anthropocene,* editado por Kregg Hetherington, 66-94. Durham: Duke University Press.

Guha, Ramachandra. 1989. Radical American environmentalism and wilderness preservation: a Third World critique. *Environmental Ethics* 11(1): 71-83.

Harcourt, Wendy y Arturo Escobar. 2002. "Women and the Politics of Place". *Development* 45, 7–14. https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1110308 .

Jarosz, Lucy. 2011. Nourishing women: toward a feminist political ecology of community supported agriculture in the United States. *Gender, Place & Culture 18* (3): 307-326.

Leff, Enrique. 2017. Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política. *Ambiente e Sociedade* XX(3):229-262.

Lewis, Henry T. 1989. Ecological and Technological Knowledge of Fire: Aborigines versus park rangers in Northern Australia. *American Anthropologist* 91 (4): 940-961.

Mathews, Andrew S. 2006. Ignorancia, conocimiento y poder: El corte de la madera, el tráfico ilegal y las políticas forestales en México. *Desacatos*, núm. 21, 135-160.

Moreano, Melissa; Molina, Francisco y Bryant, Raymond. 2017. Hacia una ecología política global. En: Alimonda, H. Toro Pérez, C. y Martin, F.

(coords.) *Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica.* VOL. I. UAM y CLACSO, Buenos Aires. 197-211 pp.

Neumann, Roderick. 1992. Political ecology of Wildlife Conservation in Mt. Meru area of Northeast Tanzania. *Land Degradation and Rehabilitation* 3: 85-98.

Osborne, Tracey. 2017. Public political ecology: a community of praxis for earth stewardship. *Journal of Political Ecology* 24 (1): 843-860.

Pulido, Laura. 2000. Rethinking environmental racism: white privilege and urban development in Southern California. *Annals of the Association of American Geographers* 90: 12-40.

Robbins, Paul F. 2001. Tracking invasive land covers in India, or, why our landscapes have never been modern. *Annals of the Association of American Geographers* 91 (4): 637-659.

Rocheleau, Dianne y David Edmunds. 1997. Women, men and trees: gender, power and property in forest and agrarian landscapes. *World Development* 25 (8): 1351-1371.

Rodman, Margaret Critchlow. 1992. Empowering Place: Multilocality and Multivocality. *American Anthropologist* 94 (3): 640-656.

Scoones, Ian. 1999. New ecology and the social sciences: what prospects for a fruitful engagement? *Annual Review of Anthropology* 28: 479-507.

Sivaramakrishnan, K. 2005. Some intellectual genealogies for the concept of everyday resistance. *American Anthropologist* 107 (3): 346.

Sundberg, Juanita. 2011. Diabolic caminos in the desert ant cat fights on the río: a posthumanist political ecology of boundary enforcement in the United States-Mexico borderlands. *Annals of the Association of American Geographers* 101 (2): 318-336.

Tetreault, Darcy Victor. 2019. Resistance to Canadian mining projects in Mexico: lessons from the lifecycle of the San Xavier Mine in San Luis Potosí. *Journal of Political Ecology* 26 (1): 84-104.

Thomas, Kimberly, R. Dean Hardy, Heather Lazrus, Michael Mendez, Ben Orlove, Isabel Rivera-Collazo, J. Roberts Timmons, Marcy Rockman, Benjamin P. Warner y Robert Winthrop. 2018. Explaining differential vulnerability to climate change: a social sciences review. *Climate Change* Mar-Abr; 10 (2): e565 https://doi.org/10.1002/wcc.565

Tsing, Anna. 2013. Sorting out commodities: How capitalist value is made through gifts. *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 3 (1): 21-43.

Vaccaro, Ismael y Oriol Beltran. 2024. Genealogías de la confusión en la teoría de la propiedad: de las montañas comunales de los Pirineos a los comunes ambientales, políticos y digitales.

West, Paige, James Igoe y Dan Brockington. 2006. Peoples and parks: the social impact of protected areas. *Annual review of Anthropology* 31: 251-277.

Williams, Brett. 2001. A river runs through us. *American Anthropologist* 103 (2): 409-431.

Wolf, Eric. 1972. Ownership and Political Ecology. *Anthropological Quarterly* 45: 201-05.

SECCIÓN A.
CREANDO UN CAMPO

1. La propiedad y la ecología política*[1]

Eric Wolf

Los estudios presentados en este simposio demuestran lo sofisticado que han llegado a ser los antropólogos para dar seguimiento a los vínculos de conexión en los ecosistemas locales y en la especificación de los parámetros de los cambios económicos. Por supuesto, los Alpes ofrecen un laboratorio magnífico para el antropólogo ecológico interesado en las ramificaciones, en un momento dado y a lo largo del tiempo, de las microvariaciones en altitud, pendiente, suelo, niveles de precipitación, temperatura, viento e incidencia del sol y la sombra. Los trabajos presentados aquí documentan la importancia de estas variaciones en la distribución de hombres, animales y plantas en el paisaje, y en la especificación, planificación de sitios y tareas de trabajo. Todos los trabajos demuestran lo importante que es, para un hogar en un momento dado, lograr un equilibrio entre el acceso sin restricciones a una combinación de recursos caracterizados por esta heterogeneidad y la gestión de las reglas jurídicas relativas a quién puede disfrutar de los recursos. De hecho, buena parte de la información acerca de la ecología cultural de los Alpes puede comprenderse como el resultado de un juego continuo contra un ambiente organizado, de manera centrífuga, por poblaciones equipadas con dos órdenes de reglas ambiguas y frecuentemente contradictorias. Para sobrevivir en tal ambiente, una población debe organizar sus recursos en conjuntos viables, más allá de los requisitos de propiedad y herencia. Esto se

1 Publicado originalmente en Eric Wolf, 1972, "Ownership and political ecology", *Anthropological Quarterly 45*: 201-05.

*Nota del traductor [en adelante N. de T.]. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto pueden no figurar en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen. Con el fin de respetar íntegramente el contenido y la forma del texto de origen, no se ha añadido, modificado ni completado referencias más allá de lo proporcionado por los autores.

hace en gran medida, adoptando el lenguaje utilizado por Robert Netting en su artículo, a través del desarrollo de estrategias a largo plazo de expansión, intensificación y regulación. Al mismo tiempo, las dinámicas de propiedad de hogares individuales se oponen con frecuencia a estas estrategias a largo plazo, privilegiando los reajustes de recursos a corto plazo según otro orden de reglas, las de la propiedad y sucesión de derechos de propiedad.

Las ponencias del simposio nos llevan bastante lejos hacia una mejor comprensión de los fenómenos involucrados. Evitando un análisis estático de derechos jurídicos, nos ofrecen una perspectiva procesual de la propiedad, en sus variados parámetros, ecológicos y sociales. Por tanto, también señalan la dirección correcta para el análisis, esbozada de la manera más clara, quizá, en el trabajo de Berthoud. La relación de propiedad en las sociedades complejas no es solamente el resultado de los procesos ecológicos locales o regionales, sino un campo de batalla de fuerzas en oposición que utilizan los esquemas jurídicos para mantener o reestructurar las relaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad. De este modo, el capitalismo progresa usando las reglas jurídicas de propiedad para despojar al trabajador de sus medios de producción y negarle el acceso al producto de su trabajo. Las reglas locales de propiedad y herencia no son simplemente normas para la asignación de derechos y obligaciones entre una población determinada, sino, más bien, mecanismos que median entre las presiones ejercidas por la sociedad en general y las exigencias del ecosistema local. Sin duda, con frecuencia las reglas de herencia son moldeadas por los intereses cambiantes de las élites no locales. Se dice que las Cortes Catalanas favorecieron la introducción de la indivisibilidad con el fin de reclutar mano de obra para el comercio marítimo y la guerra. Los gobernantes territoriales de Baviera defendieron la indivisibilidad en el siglo XVII y la divisibilidad en el XVIII; en Escandinavia, la divisibilidad fue común hasta el siglo XVII y luego rechazada a partir del siglo XVIII.

Se puede plantear el mismo punto en relación con las reglas que gobiernan la distribución del poder de toma de decisiones en la familia. A primera vista, uno se siente tentado a derivar el papel de jefe de hogar en gran medida como resultado de factores de toma de decisiones dentro del contexto ecológico local. Así, las características de herencia indivisible,

distancia social y antagonismo entre hermanos, y la herencia con autoridad unitaria, parecen formar un nexo funcional invariante. Sin embargo, la autoridad unitaria y la distancia social entre hermanos también existe en San Félix, en el Tirol del Sur, donde las prácticas de herencia con frecuencia contradicen el ideal de la indivisibilidad (Cole y Wolf, de próxima publicación), así como en condiciones de divisibilidad, como en Oberhausen, en Renania Palatinado (McGregor y Pelto, 1963). Existe la tentación de atribuir estos ejemplos de estructura de hogar autoritarias tanto a la integración de estos hogares a sistemas políticos autoritarios como a cualquier causalidad que emane del contexto ecológico local. La necesidad de ver la vida local dentro de una relación dialéctica con el entorno más amplio creado por el hombre se subraya cuando se considera la migración como uno de los mecanismos de regulación estratégica dentro del ecosistema local, como lo hace Robert Netting en su análisis de Törbel en los Valais suizos. Ciertamente, Suiza empezó a exportar mano de obra militar desde una fecha temprana, con consecuencias políticas importantes tanto dentro como fuera del país. Refiriéndose al siglo XVI, V. G. Kiernan afirma:

> Una nueva raza de personas provenientes de la montaña llegaba al mercado, los suizos, durante dos siglos los soldados mercenarios por excelencia de Europa. Fue una paradoja sorprendente que ahora los antiguos grupos gobernantes fueran, en gran medida, salvados por estos alpinistas, quienes tanto desafiaban el feudalismo en sus fortalezas alpinas (1967: 130).

Y continúa señalando que esta situación no solo tenía consecuencias para el mundo, sino también para las comunidades de origen suizo:

> Los tres siglos de simbiosis con la Francia despótica tuvieron consecuencias nefastas para Suiza. Las políticas cantonales fueron corrompidas por los importes recibidos por las licencias de exportación de soldados, y grupos patricios incrementaron su poder a expensas de la gente común. Zwingli había intentado en vano poner fin a este tráfico, junto con la prostitución y el adulterio (1967: 138).

De esta manera, las reglas diseñadas para dirigir y contener las dinámicas de la propiedad a veces pueden encajar con las estrategias a largo plazo utilizadas por una comunidad para expandir, intensificar o regular su propio nicho ecológico. Las reglas ideales de herencia pueden en ocasiones confirmar los esfuerzos de regulación proporcionando combinaciones viables de recursos a un grupo finito de casas de campo. Por otro lado, las reglas de divisibilidad y partibilidad pueden amenazar con fragmentar las combinaciones de recursos y así poner en peligro los mecanismos regulatorios, como en el caso de Kippel descrito por Friedl. Lo mismo puede ocurrir en situaciones donde la indivisibilidad ideal no se cumple, de hecho, como en cualquier situación donde los intereses a corto plazo de los hogares contradicen los controles regulatorios de la comunidad.

Para sobrevivir a estas contradicciones, el ecosistema local necesita encontrar un equilibrio entre tendencias centrífugas y centrípetas. Quizá tenía mayor capacidad para lograr esto cuando el poder relevante de toma de decisiones se encontraba en sus propias manos y cuando las influencias disruptivas provenientes del exterior podían contenerse en las fronteras de la comunidad. Los cambios vertiginosos que se han producido tras la Segunda Guerra Mundial, en especial con el desarrollo de actividades ajenas a la agricultura y la transformación de tierra, el trabajo, las herramientas y el dinero en mercancías sujetas a hogares y sus miembros, sugieren que el uso de estrategias de propiedad y herencia está cada vez más impulsado por factores fuera del control de la comunidad.

Cuando revisamos estos estudios sobre las comunidades locales de los Alpes Orientales y Occidentales y su relación entre sí, el espacio alpino parece menos uniforme de lo que se había pensado antes. Acaso exista una diferencia real entre los dos sectores de la media luna alpina. Los Alpes Occidentales fueron escenario de procesos de asentamiento temprano que creó una red densa de comunidades autorreguladas. Los valles grandes transversales, junto con sus ramas laterales, llegaron a mostrar una tendencia fuerte hacia la confederación política y la unificación, tanto dentro de los valles como entre los valles. Estas confederaciones tal vez tuvieron prototipos prehistóricos, como ha sugerido Robert K. Burns en numerosas ocasiones, pero los cantones forestales suizos sólo se fusionaron

en el siglo XIII, y la República de los Escartones en los Alpes franceses y los Grisones en la Suiza oriental, en el siglo XIV.

Se sospecha que estas lejanas extensiones "horizontales" de las alianzas políticas pueden haber tenido alguna relación con el comercio y la trashumancia de larga distancia (como el movimiento de ganado desde la desembocadura del Ródano hasta las alturas del Queyras), y las migraciones estacionales de artesanos y especialistas. Por otro lado, también es cierto que el Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía pretensiones sobre una gran parte del área, nunca desarrolló un marco político "vertical", jerárquico y viable. También en el oriente, la comunidad autorregulada formaba la célula básica del edificio social, pero no se percibe un desarrollo fuerte de confederaciones en el ámbito del valle, o alianzas entre valles. En su lugar, presenciamos una consolidación temprana del gobierno territorial, con un aparato de gobierno viable, organizado "verticalmente". La circulación de ganado y de artesanos es mucho más restringida en el espacio, y el comercio de larga distancia se expande bajo la tutela del Gobierno organizado jerárquicamente en lugar de estar bajo la tutela de ligas.

El predominio de la herencia divisible en el oeste impresiona, y el de la indivisibilidad en el este impresiona aún más. Dado que la divisibilidad parece asociarse a zonas de asentamiento densas y antiguas, la indivisibilidad parece caracterizar zonas de expansión fronteriza, y tal vez esta diferencia en los patrones de herencia pueda ofrecernos una pista hacia cadenas más "profundas" de causalidad estructural que, en última instancia, puedan ayudar a explicar los otros contrastes señalados con anterioridad. De hecho, los Alpes Occidentales forman parte de la *Urdeutschland*, de la zona fronteriza entre las provincias romanas y las confederaciones germánicas, una zona que comprendía las cuencas de drenaje del Rin y el Ródano, la antigua Lorena, la Suabia y la Borgoña. Por el contrario, la Bavaria y el Tirol miran hacia el este siguiendo los ríos Inn y Danubio hacia la zona de frontera austriaca, empujando sus fronteras hacia afuera contra la resistencia de ávaros, magiares y eslavos. No parece imposible que los asentamientos antiguos y densos, la divisibilidad, las alianzas amplias y la ausencia de un Gobierno viable que abarcara todo el territorio encajaban en el occidente, mientras que los asentamientos de frontera, la

indivisibilidad, una gama de unidades políticas limitadas, pero con Gobiernos "verticales" fuertes de múltiples niveles se condicionaron mutuamente en el oriente. Para comprobar o refutar estas hipótesis necesitamos combinar nuestras investigaciones acerca de múltiples contextos locales con un conocimiento mayor de la historia política y social, y el estudio de las relaciones intergrupales en campos estructurales más amplios.

Referencias

Kiernan, V. G. 1967. "Foreign mercenaries and absolute monarchy". En *Crisis in Europe, 1560-1660* (pp. 124-149). Anchor Books.

Mcgregor, J. y P. J. Pelto. 1963. "Community structure and interpersonal relations: a logical and empirical analysis". *Papers read at the Annual Meeting of the American Anthropological Association*, 23 de noviembre.

Whittelesy, D. 1944. *The earth and the state*. Holt.

2. El medio ambiente y acceso a los recursos en África[*1]

Piers Blaikie

Este artículo se ha escrito como contribución a la orientación futura de un programa de investigación acerca de la crisis agraria en África, iniciado por el Joint Committee on African Studies (JCAS)[2] del American Council of Learned Societies y el Social Science Research Council. El objetivo del artículo es ofrecer una agenda para la investigación acerca del ambiente y el acceso a los recursos en África, y es uno de cuatro que proporcionan una revisión de algunos de los temas de investigación más importantes, y sugieren maneras en que podrían abordarse.

Cuatro premisas subyacen a esta iniciativa de investigación y han sido abordadas en un artículo anterior (JCAS, 1986a). Estas son: a) Que la agricultura africana puede comprenderse en términos de una serie de operaciones técnicas con una variedad de procesos biológicos, sociales, políticos y ecológicos que actúan sobre cada una de ellas; b) que las estructuras agrícolas sólo pueden comprenderse en relación con los patrones generales de control de recursos; c) que las estructuras políticas, económicas y culturales en África están en cambio continuo conforme se integran en los sistemas nacionales e internacionales, y d) que el funcionamiento de los hogares, economías regionales y los sistemas nacionales e internacionales son interdependientes (JCAS, 1986a). Estas premisas, a las cuales volveremos a hacer referencia más adelante, pueden ser nombradas la premisa

---

1 Publicado originalmente en Piers Blakie, 1989, "Environment and access to resources in Africa Land", *Journal of the International African Institute 59*(1): 18-40.
*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto se encuentran incompletas dentro de la lista de referencias; por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

2 N. de T. La sigla en inglés no fue alterada durante la traducción, manteniéndose en su formato original.

de la interacción interdisciplinaria, la premisa del control dinámico de recursos, la premisa de la incorporación/integración y la premisa de los niveles y escalas. Ahora explicaremos cada una, con referencia particular al ambiente y el acceso a los recursos.

A la luz de estas premisas, el tema "ambiente y acceso a los recursos" se interpreta de la siguiente manera. Existe una relación dinámica entre los patrones de acceso a los recursos y la "información ambiental" desde donde se despliegan los desenlaces de acceso a los recursos. Estos desenlaces toman la forma de usos específicos de suelos, uso y movimiento de nutrientes del suelo y de la vegetación, de inversiones o desinversiones en las capacidades de la tierra, etc. Por tanto, estos desenlaces modifican la información ambiental de tal manera que los futuros patrones de acceso pueden adaptarse o volver a cambiar el ambiente de manera recursiva y dialéctica. Por supuesto, estos desenlaces no sólo deben comprenderse en términos ambientales, sino también como procesos de la propia economía política agraria. Los medios de subsistencia se aseguran o se pierden; algunas personas acumulan capital mientras otras lo pierden. La diferenciación de la población rural puede avanzar o detenerse. Sin embargo, es imprescindible vincular el cambio ambiental y el cambio agrario tanto desde la perspectiva teórica como del trabajo empírico.

Este artículo se afianza en la afirmación de que muchas cuestiones acerca del ambiente y el acceso a los recursos están rodeadas de incertidumbre. Esto ocurre debido a una carencia de información confiable, en particular acerca del cambio ambiental; los problemas ideológicos y técnicos para la definición y la medición; la incapacidad para identificar de manera confiable la capacidad humana en el cambio ambiental (en contraste con, por ejemplo, el cambio climático); toda una gama de interpretaciones contradictorias acerca del impacto de la degradación de tierras (¿importa?, ¿a quién?, ¿por qué?); los diferentes niveles de abstracción y la escala involucrados en el análisis, y la "atomización" de las teorías que vinculan el cambio ambiental y el cambio social. Estas fuentes de incertidumbre son brevemente consideradas, y luego se proponen una serie de respuestas en términos de la agenda identificada para investigaciones futuras. Una parte central de esta serie es un modelo dinámico del

cambio ambiental-acceso a recursos, donde se enfoca en las respuestas de los usuarios de tierras al cambio ambiental. Estos dos modelos ofrecen un contexto claramente especificado y un punto de anclaje para varios focos de interés teórico en los estudios agrarios africanos que hasta ahora no se habían vinculado entre sí.

La incertidumbre en la investigación acerca del ambiente y el acceso a los recursos

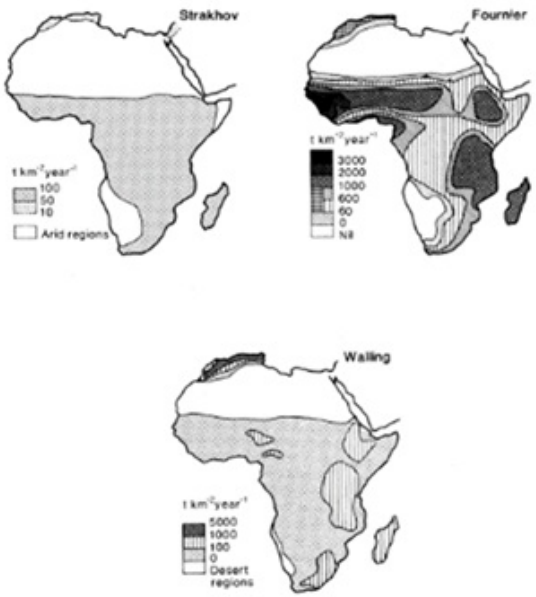
Existen múltiples opiniones diferentes acerca de muchos aspectos del cambio ambiental y social. Quizá uno de los aspectos más inciertos es la cuestión de cómo el deterioro ambiental, en específico la degradación de tierras es con frecuencia comprendido como un factor vital en la crisis agraria africana. En el ámbito de lo exclusivamente "social" (o sea, aspectos políticos, económicos y sociológicos) del cambio agrario, existe una literatura más amplia y menos incierta, aunque, como se ha resumido (en JCAS, 1986b), subsisten ambigüedades y una impresión persistente de que la mayoría de las hipótesis sólo resultan provisionales. La incertidumbre en las esferas política, económica y sociológica no obedece a problemas de la información o de la medición, ni de los desacuerdos ideológicos, sino de una "atomización" extraordinaria de las teorías del cambio agrario, y una incapacidad de vincularlas con la dialéctica ambiental/social descrita antes.

En el ámbito de la comprensión y evaluación de la degradación ambiental en África, emergen las siguientes fuentes de incertidumbre. En primer lugar, existe el problema de la información —su escasez, falta de fiabilidad, irrelevancia, y ambigüedad—. "Rara vez las estadísticas están en la forma correcta, son difíciles de conseguir, y más difícil aún de creer e interpretar" (Naciones Unidas, 1977: 177). Quizá hay un número de regiones en África donde, por desgracia, la certeza del problema de la degradación de tierras es conocida por residentes locales y comentaristas externos de manera muy clara. El caso de Etiopía es un ejemplo obvio, donde la evidencia abrumadora de la erosión, junto con niveles bajos de productividad, pobreza, una larga historia de relaciones sociales de producción extractivas semifeudales y unos años excepcionalmente secos, todo

en conjunto, puede provocar una situación de hambruna crónica (Uhlig, 1984). Sin embargo, incluso en este caso, solo podría estimarse el grado en el cual puede señalarse a la erosión como responsable en términos de la variabilidad espacial y su contribución a los rendimientos bajos y diversos de cultivos y ganado. Un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Comida y la Alimentación (FAO), el "Ethiopian highland reclamation study" (FAO, 1986), nos ayuda a reducir esta incertidumbre. Otros comentarios argumentados de manera más general, por ejemplo (Lamb y Seifulaziz, 1983; Timberlake, 1984; ICIHI, 1986a; 1986b) vinculan el hambre con su causa "real", la degradación de tierras. Estas afirmaciones son útiles porque ayudan a movilizar la opinión pública internacional, pero suelen argumentar desde aseveraciones generalizadas y necesitan consultar varios estudios de caso de distintos puntos del continente para apoyar de forma empírica. La investigación posterior necesita ser más rigurosa, empleando mejores mediciones y metodologías más refinadas, para así poder resolver problemas específicos.

Los problemas al medir la degradación de tierras han sido resumidos de manera satisfactoria por Stocking (1978; 1987), y no es el objetivo de este artículo abordarlos en detalle. Existen muchos casos de estimaciones de las tasas de erosión de suelos para las mismas regiones que varían por un factor de 50, y algunos de ellos son claramente ridículos (Seckler, 1987: 86). La Figura 1 ilustra el grado de incertidumbre que rodea a las estimaciones de sedimentos en suspensión en África (Stocking, 1987: 54). Aunque se debe admitir que existen métodos alternativos para medir la degradación de tierras, además de los sedimentos en suspensión, la medición de este parámetro es fundamental para la mayoría de los esfuerzos por medir las tasas de erosión del suelo. Uno de los temas más importantes es la relación entre la pérdida de suelos y el rendimiento de la reducción de cultivos y zonas de pastoreo.

Figura. 1. Mapas de sedimentos en suspensión en África (a partir del trabajo de Strakhov, 1967; Fournier, 1960; Walling, 1984).



Stocking y Peake (1985) han revisado la investigación existente y demostrado lagunas enormes en nuestro conocimiento. Señalan a la investigación que expone a las claras la gran diferencia en el impacto sobre el rendimiento de los cultivos dada la tasa de remoción de suelos tropicales y templados, aunque estos se miden en términos de magnitud y no en una escala de medida continua y precisa. El modelado cuantitativo de la relación entre erosión y rendimiento simplemente es insuficiente para la estimación de los beneficios a futuro de la conservación de suelos y agua con base en las relaciones lineales generales. También hace falta información *in situ* para comparar la situación con o sin algún proyecto propuesto. Las diferencias de precipitaciones (cantidad e intensidad), horas de sol, granizadas, temperatura, etc., hacen que la información de un año acerca de la erosión y los rendimientos sea inadecuada, y series de información en el tiempo confiables simplemente no existen fuera de

las estaciones experimentales. Datos transversales, desde los cuales se pueden realizar suposiciones *ceteris paribus*, y que pueden ser admitidos para aislar el impacto de un uso particular de tierras o de un proyecto de conservación, se encuentran con el mismo problema, pues por lo general no existen (Bojö, 1986: 26-27).

Sin embargo, lo que queda claro a partir de esta investigación es que la productividad de muchas zonas tropicales es demasiado sensible incluso a pequeñas pérdidas de suelo. Algunos datos nigerianos sugieren que los rendimientos se cortaron por la mitad en pendientes de 1% después de pérdidas de suelo de sólo 30 toneladas por hectárea. Se ha sugerido que un ritmo de pérdida de suelo tolerable para suelos de este tipo sería tan bajo como 0.5 toneladas por hectárea por año (Lal, 1984). También parece que los rendimientos de cultivos en muchos suelos tropicales se reducen de forma negativa y exponencial con una pérdida acumulada del suelo. Esto significa que la pérdida inicial de suelos tiene un impacto enorme en los rendimientos, por lo que resulta tentador buscar recursos escasos para la conservación no donde ya ha ocurrido la erosión de suelo durante mucho tiempo y donde existe baja productividad (y por tanto rinde beneficios bajos para la inversión en conservación), sino invertir recursos en lugares de alta productividad que aún no han sido afectados por la pérdida de suelos, pero sí están amenazados por ello. De esto se concluye que la recuperación de muchas zonas ya erosionadas puede estar más allá de la racionalidad económica cuando hay escasez de recursos de fondos, investigación y extensión agrícola, como de hecho sucede en África. Sin embargo, todas estas tendencias necesitan ser verificadas (Stocking y Peake, 1985: 28). La atenuación de los datos y de los problemas de modelaje puede llevarse a cabo en parte con el desarrollo de métodos baratos y robustos de medición (Abel y Stocking, 1987).

Un elemento importante en el estado de incertidumbre acerca de lo que le ocurre al ambiente a largo plazo (por ejemplo, durante una o dos décadas) tiene que ver con la diferencia en las percepciones de los usuarios de las tierras y las de sus Gobiernos. Existen muchos ejemplos de oficiales coloniales que escriben consternados en los años treinta y cuarenta acerca de los cultivos en pendientes muy empinadas, deslizamientos de tierra y

una catástrofe inminente debido al rápido crecimiento demográfico. Sin embargo, hoy existen densidades de población dos o tres veces mayores en esas mismas regiones. Buena parte de estos puntos de vista coloniales pueden comprenderse como resultado del prejuicio y un modelo técnico eurocéntrico de lo que significa la "buena agricultura", pero a la vez parece que muchos ambientes africanos resultan más resilientes que lo que pensaban los europeos. Deslizamientos de tierra, que de repente aparecen en grandes números en las colinas, pueden suscitar graves premoniciones de parte de oficiales, pero suelen volver a recubrirse de vegetación y se estabilizan muy pronto (Berry y Townsend, 1973).

Adicionalmente, los Gobiernos suelen percibir el problema de la erosión en términos de sus propias suposiciones técnicas. En muchos lugares de África Oriental colonial, los conservacionistas de suelos del Gobierno habían adquirido su formación o en EE. UU., o en libros de texto escritos en ese país. Estas fuentes ponen fuerte énfasis en el rol de la inclinación y la longitud de la pendiente como los mayores determinantes de la erosión de suelos, y en consecuencia recomiendan la construcción de terrazas como técnica principal para la conservación de suelos. Solo fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se dieron de cuenta que, para muchos lugares en África Oriental y Central, las características de la pendiente resultaban mucho menos importantes para determinar el ritmo de erosión de lo que se había pensado antes. En su lugar, ahora se entiende y se otorga importancia al rol de la lluvia, por lo que los cultivos de cobertura y el mantillo se piensan como las técnicas de conservación más apropiadas (Anderson, 1984). De hecho, los cultivos intercalados y de relevos son elementos integrales en muchas de las tecnologías agrícolas africanas, y las políticas coercitivas para convencer a los africanos a construir bancales en terrazas con frecuencia resultan innecesarias (Mlia, 1987; Blaikie, 1987).

Una segunda área de incertidumbre es la atribución, frecuentemente controvertida, de los cambios percibidos en ritmos de erosión, a la agencia humana o al cambio climático. El "tema de la desertificación", tan comentado y discutido en conferencias después de las hambrunas del Sahel a principios de los setenta, reveló brechas infranqueables en interpretación. En algunas localidades parece haber buena evidencia para pensar que la

desertificación ha sido resultado de cambios en las prácticas de uso de tierras (Lachenmann, (1985), para la zona del Sahel; Sinclair y Fryxell (1985), y Lachenmann *et al.* (1985), para Mali; Franke y Chasin (1980), para el sur de Niger). Sin embargo, sigue existiendo gran incertidumbre acerca de si el desierto está avanzando o no, y si la agencia humana fue o es responsable. Una parte de este debate es mencionada por Watts (1986: 8), quien escribe: "Parte del debate sobre la degradación del Sahel sigue irremediablemente atrapado en generalidades sin probar y dudosas suposiciones acerca de la ecología de pastizales, los patrones de sobrepastoreo y las prácticas agrícolas". Cualquier intento de culpar a "fuerzas naturales" de la desertificación en lugar de la penetración del capitalismo es desechado en algunas partes como una cortina de humo burgués. Esta polarización resulta simplista y ayuda poco dado que es la dialéctica entre el cambio ambiental y social la que debe proveer el contexto dentro del cual se discute la degradación de tierras.

La tercera fuente de incertidumbre es más relevante para los intereses de este artículo: ¿importa la degradación de tierras, y a quién? Esta cuestión ya ha sido discutida por Blaikie (1985: 12-37), quien argumenta que la cuestión clave es la perspectiva de acceso futuro de agricultores y pastores a los recursos y tecnologías que pueden detener o compensar la degradación del suelo. Seckler (1987) y Nobe y Seckler (1979) han utilizado la idea conocida de valores de opción, que sí resulta útil en este asunto. Un valor de opción funciona como una póliza de seguros: representa un precio que alguien está dispuesto a pagar por encima del costo normal de una operación, con el fin de reducir el riesgo y la incertidumbre. En el área de la conservación del suelo y el agua es posible que no se conozca cuánto valor tendrá una determinada cantidad de tierra en un lugar específico para las generaciones futuras. Puede saberse que sin un esfuerzo de conservación el suelo se erosiona y se perderá la opción de su uso futuro. Si conservar esta opción para el agricultor o un proyecto tiene un costo, sería útil conocer el valor de esta opción. Por ejemplo, en el caso de Lesoto (Nobe y Seckler, 1979), los costos de la conservación de suelos son altos, mientras que los rendimientos para conservar suelos ya dañados y de baja productividad son bastantes bajos. En este momento

muchos sotho trabajan en Sudáfrica como trabajadores asalariados. Pero ¿qué ocurrirá si los sotho son enviados a casa y tienen que depender de nuevo de las actividades agrícolas y pastoriles poco remuneradas? En este caso, el grado de incertidumbre es agudo, por lo que, para reducir esta incertidumbre y asegurar la base física de un medio alternativo de sustento en casa, su labor tendría mayor valor. Así, vale la pena invertir más recursos en la conservación, aunque las ganancias de la agricultura sean bajas, dado que en este momento el empleo alternativo para los hombres aún existe. No obstante, si los valores de opción pueden ayudar y ofrecer un motivo suficientemente convincente para la conservación, está aún por verse. En opinión de Nobe y Seckler (1979, 152):

> … En las condiciones actuales la productividad agrícola en Lesoto es tan baja que no existen las condiciones económicas para un programa de conservación convencional. Las prácticas agrícolas son tales que, aun con las mejores prácticas de conservación, la tierra y las propias obras continuarán erosionándose. En segundo lugar, la producción agrícola de la tierra es tan baja que no está tan claro que las ganancias serán suficientes para pagar los costos de mantenimiento de las obras de conservación, mucho menos los costos totales.

Así, la manera como se usa la noción de valores de opción puede resultar más eficaz para justificar las acciones gubernamentales en la conservación de suelos y agua que como un modelo normativo o empírico para el comportamiento individual. De hecho, como señala Turner (1982) en el contexto de Lesoto, la aparición de un barranco en las tierras de un agricultor confirma el punto de vista de este, para quien tiene más sentido migrar a las minas de Sudáfrica que gastar recursos escasos remendando tierras de muy baja productividad. Existe aquí un elemento de refuerzo que oscurece el valor de opción del individuo y al mismo tiempo lo realza. Puede haber un argumento para extender esta noción hacia un cálculo más exhaustivo que tenga en cuenta las perspectivas de agricultores y pastores del futuro. Esto incluye acceso a fuerza de trabajo, capital y tecnologías que servirían o bien para enmascarar los efectos de la erosión de suelos (por ej. la aplicación de fertilizantes químicos, el uso de variedades me-

joradas de cultivos que compensarían las pérdidas en rendimientos de variedades convencionales debido a la erosión de suelos), o para ofrecer alternativas de ingresos provenientes de fuentes ajenas a la agricultura. Existen posibilidades para evaluar las tendencias a largo plazo de las economías agrarias nacionales o regionales utilizando una combinación de estadísticas agregadas y el análisis de la economía política. Un ejercicio tal revelaría que en una gran parte de África un número considerable de agricultores y pastores no tendrán acceso a las técnicas agrícolas nuevas o a los recursos para desarrollar o incluso continuar usando las existentes, y serán atrapados en las tierras erosionadas existentes sin posibilidades significativas para el empleo alternativo. Los valores de opción frente al crecimiento de población, oportunidades inciertas fuera de la agricultura y la diferenciación parecen ser muy altos en estos casos (USAID, 1981, para Rwanda; Roder, 1977, para Swazilandia). No obstante, este tipo de escenario informado con algún grado de probabilidad cambia el enfoque de lo que en términos estrictos se entiende por valor de opción hacia una mirada de posibles fuentes de ingreso a futuro de la agricultura y la ganadería.

La última fuente de incertidumbre corresponde a la existencia de múltiples niveles de abstracción y generalidad en el análisis de la degradación de tierras. Esta es la premisa de "niveles y escalas" del proyecto JCAS mencionado antes. La degradación de tierras ocurre en el punto de intersección entre la actividad humana y un sitio dado con características físicas particulares. Es causada por decisiones reiteradas acerca del uso de la tierra que a su vez derivan de la economía política agraria. Por tanto, existen procesos y relaciones generales entre usuarios de tierra de diferentes clases sociales, el Estado y la economía mundial que determinan estas decisiones sobre el uso de la tierra. Estos ocurren a diferentes niveles de especificidad y con frecuencia no tienen una manifestación geográfica; no ocurren en lugares particulares. Sin embargo, las decisiones acerca del uso del suelo y la naturaleza de las tierras donde dichas decisiones se toman sí son específicas de un lugar concreto. La confusión surge cuando se llevan a cabo generalizaciones acerca de las causas o los impactos de la degradación de tierras (en particular cuando estas resultan de explicaciones de

una hipótesis única) que no diferencian entre procesos generales sociales o de cambio (por ej. el crecimiento poblacional o la proletarización) y la ocurrencia de degradación en un lugar específico, o sea, donde la degradación de tierras realmente ocurre y tiene su impacto inmediato.

Si ahora consideramos la incertidumbre en la investigación que se centra en el acceso a los recursos, los factores contribuyentes son diferentes y quizá los niveles de incertidumbre son menores. En primer lugar, los problemas en la medición del cambio agrario, aunque considerables, son de un orden menor que los enfrentados en el momento de medir la degradación de tierras o las caídas en los rendimientos. Aun así, existen problemas formidables, como menciona Berry (1984a: 61-2), en particular, con los datos de producción agrícola agregados. Sin embargo, existen algunas encuestas bastante confiables que proporcionan buenos indicadores de los cambios en el control de acceso entre diferentes grupos. Por ejemplo, los Zimbabwe National Household Capability Surveys (ZNHSCP[3]), la Botswana Rural Income Distribution Survey de 1974-75, el Agricultural Census de 1980 de Malaui, los Kenya Integrated Rural Surveys, o algunos estudios *ad hoc* más pequeños (por ej. Marter y Honeybone (1976), en Zambia), proporcionan datos bastante confiables. No obstante, estas son meramente descripciones empíricas, con sus propias categorías y elección de variables, y solo describen una situación en un momento específico. Los problemas del proceso y del cambio, por supuesto, están mucho más sujetos a debate, y aquí es evidente la existencia de muchas teorías y modelos del cambio, pero estos no abordan directamente los problemas ambientales y sociales que estamos tratando en este artículo. Existe literatura bien desarrollada acerca de la diferenciación del campesinado africano (véase una pequeña muestra en *Review of African Political Economy*, 10 [1977] y, para el Sudán, *26* [1983]; Bernstein, 1977; 1979, para el "constricción de la reproducción en Tanzania"; Franke y Chasin, 1980, para el Sahel Occidental; Watts, 1984, para el norte de Nigeria; Marter y Honeybone, 1976 para la Zambia; Shepherd, 1984, para el Sudán). Prácticamente en ningún lugar de esta gran cantidad de literatura se puede encontrar un tratamiento sistemático

3 N. de T. A lo largo del texto se conserva la sigla original en inglés, ZNHSCP, que corresponde a Zimbabwe National Household Capability Surveys.

y preciso de la relación entre los patrones cambiantes de acceso a los recursos y el cambio ambiental. En ocasiones se hace mención del ambiente, aunque por lo general sin fundamento; no obstante, Richards (1983: 23) llama la atención hacia la brecha entre la sociología agraria y la ecología agrícola. Existe otra literatura bien desarrollada acerca de los sistemas de agricultura en África, con frecuencia ofreciendo explicaciones para los cambios observados. Fuentes como Allan (1967), Ruthenberg (1983) y los programas continuos de sistemas de cultivos de IRRI e ICRISAT han arrojado mucha luz acerca de algunos de los cambios importantes en las prácticas agrícolas. Sin embargo, por lo general estos estudios no han buscado explicar dichos cambios en términos de los procesos sociales; en particular, los mecanismos que distribuyen el acceso a los recursos entre la población rural. A continuación, se hacen algunas sugerencias sobre cómo se podría llevar a cabo un cruce entre la sociología agraria y la ecología agrícola.

Enfoques para reducir la incertidumbre

Thompson y Warburton (1985), enfrentando "incertidumbre a escala de los Himalayas", acerca de cómo actuar con respecto a esa región, propusieron que, en lugar de centrarse en la pregunta de "¿qué son los hechos?", debemos preguntar "cómo te gustaría que fueran los hechos?". En una serie de artículos en la revista *Mountain Research and Development*, plantean algunas soluciones. Algunas de estas sugerencias pueden estar adaptadas a las circunstancias de la investigación sobre degradación de tierras que comparten este grado de incertidumbre. Quizá valdría la pena aceptar "la gran pluralidad de definiciones del problema, percepciones, expectativas y racionalidades" (Thompson y Warburton, 1985: 123) y empezar con las definiciones, percepciones, etc., de los propios usuarios de la tierra. Este punto de vista converge con al menos tres enfoques contemporáneos acerca de temas agrarios. El primero es el reconocimiento y revaloración del conocimiento técnico indígena de los agricultores y pastores africanos (véase por ej., Allan, 1967; Prothero, 1972; Richards, 1985). En parte esto se debe al reconocimiento de la inutilidad de solo contar con una percepción (por

lo general impuesta) de la investigación agrícola para resolver unos pocos problemas (regularmente orientados hacia las necesidades de colonos o la agricultura comercial) (por ej., Anderson y Millington, 1986, para la África anglófona; Stocking, 1984, para la África "colonial"; Robinson, 1978; Klepper, 1980, para Zambia; Eltringham, 1985, para Uganda; Millington, 1985, para Sierra Leone; Beinhart, 1984, para Sudáfrica; Berry y Townsend, 1973, para Tanzania). También se reconoce que la falta de acceso de los campesinos a las nuevas tecnologías agrícolas representa el otro lado de la moneda de las "tecnologías inapropiadas". Se puede seguir este debate en Richards (1985), Ruttan (1981; 1982) y Biggs (1983; 1984). Esta nueva evaluación de las tecnologías existentes debe permitir una variedad de objetivos, el acceso a los recursos por parte de los usuarios de la tierra y, por supuesto, una variedad en la resiliencia y sensibilidad de la tierra misma. Los cultivos intercalados son un buen ejemplo: Richards (1983: 26) ha señalado cómo este grupo de técnicas agrícolas ofrece las ventajas de la conservación efectiva de suelos y humedad, distribuyendo la demanda de mano de obra a través del calendario agrícola y reduciendo los riesgos de plagas, enfermedades de plantas o sequía. Sin embargo, son antagónicos a la mecanización y las formas establecidas del diseño de investigación en estaciones de investigación agrícolas, además han sido menospreciados y desalentados desde tiempos coloniales hasta la actualidad (Belshaw, 1979).

El segundo enfoque contemporáneo con el que este artículo converge es el énfasis creciente en mejorar la productividad de las granjas y, en los proyectos de conservación de suelos y aguas dedicados, a "empezar desde donde se encuentra el agricultor", de manera que puedan integrarse la conservación con las prácticas agrícolas o pastoriles existentes. "Las políticas solo pueden tener éxito si son desarrolladas por los agricultores, y eso significa que necesitan estar entrenados e incorporar las adaptaciones apropiadas a sus conocimientos y destrezas existentes" (International Food Policy Research Institute[4], 1985, 7). Otros resultados de la investigación destacan que la conservación sólo puede ser exitosa si se integra a las

4 N. de T. A lo largo del texto se conserva la sigla original en inglés, IFPRI, que corresponde a *International Food Policy Research Institute*.

prácticas agrícolas que están en curso (por ej., USAID, 1985, para una evaluación de dos proyectos de conservación en Somalia, y Ostberg, 1986, por un proyecto razonablemente exitoso en Tanzania). Así, la atención se ha enfocado de manera creciente en las circunstancias particulares de diferentes usuarios de tierras "en su lugar", en su ambiente natural y social específico. Las soluciones únicas y las explicaciones y políticas inflexibles se reconocen cada vez más como erróneas y perjudiciales.

Un tercer enfoque convergente para la comprensión de las sociedades agrarias en los países de menor desarrollo se centra en la "nueva" economía doméstica, relacionada con la diferenciación intrafamiliar en cuanto al trabajo, control, toma de decisiones y acceso, especialmente aquellas que derivan del género y edad. Los estudios de la degradación de tierras pocas veces, o nunca, han considerado el tema de la conservación como algo que concierne a alguien más allá de un "jefe de hogar" no especificado. En gran parte de África, las decisiones respecto a la producción y el consumo son tomadas por varias personas. Las responsabilidades se solapan y a veces se contradicen, entre hombres y mujeres, entre los mayores y los jóvenes, etc. A partir de desarrollos teóricos anteriores y sus aplicaciones a África (Low, 1986), se hace muy claro que la toma de decisiones en las granjas puede a veces ser comprendida más satisfactoriamente en términos de las ventajas comparativas dentro del hogar para generar ingresos, y de la forma como se estructuran estas ventajas.

Parece haber ventajas significativas para la investigación en la degradación de la tierra en el reconocimiento de que la conservación no puede conceptuarse como el producto de las decisiones de un jefe de hogar no identificado (pero implícitamente entendido como un hombre) (Guyer y Peters, 1984). Por ejemplo, Richards (1986) compara la "empresa agrícola" de los Mende de Sierra Leona como un barco con una tripulación contratada y pagada en cada punto del viaje. Cada "viaje" se lleva a cabo a través de una estructura en cadena que incluye suelos y condiciones de humedad diferentes, donde se involucra el trabajo de mujeres en algunas áreas, mujeres mayores en otras, hombres para ciertas actividades agrícolas en ciertos momentos, etcétera. Es solo en un momento específico del calendario agrícola que aparece algo semejante a un "hogar agrícola"

separado. La toma de decisiones resulta específica a lugares particulares, pero también se vincula con determinados temas dentro de la comunidad agrícola. Guyer y Peters (1984) han editado varios artículos que identifican tanto "hogares de fogón" (subdivisiones matrifocales de un hogar patricéntrico o matricéntrico) (Ekejuiba, 1984), como otras subunidades, por lo regular de un género específico, a veces fluidos y temporales, que controlan ciertos tipos de tierras o la producción de cultivos particulares. Por ejemplo, De Schlippe (1956, citado en Ruthenberg, 1983) identifica responsabilidades específicas para el primer hijo, la segunda hermana, la madre, el marido, etc., en el cultivo de diferentes parcelas de tierra entre los zande. Hay tantos ejemplos a lo largo de la África subsahariana, que se puede decir que la división de trabajo no solamente entre tareas agrícolas, sino también entre unidades de tierras espacialmente definidas, resulta ser la regla y no la excepción. Este reconocimiento a la vez dirige la explicación de la degradación de tierras "hacia abajo" a lo social y ambientalmente específico, incluso más abajo del nivel del hogar (que en todo caso ha sido señalado más como una proyección eurocéntrica que como una realidad africana).

En suma, tres enfoques convergentes para la investigación de temas agrarios en países en vías de desarrollo han sido identificados (la pluralidad de percepciones y problemas; la necesidad de arraigar políticas para el mejoramiento de la producción en los ambientes sociales y naturales de los mismos agricultores, y una atención a los agentes por debajo o fuera del nivel del "hogar"). Todos los enfoques sugieren que los usos de los recursos y las relaciones ambientales son coyunturales y que las grandes teorías únicas suelen fracasar. Por tanto, necesitamos un enfoque que puede teorizar esta coyuntura; que permita operar las hipótesis individuales, pero en combinaciones variables; y sin embargo, que pueda combinar las características naturales de la tierra y la vegetación en un punto del tiempo con las decisiones acumulativas en el uso de tierras que surgen a partir de los procesos más generales y de mayor escala en la sociedad agraria en su conjunto.

Un modelo de acceso a los recursos para las decisiones sobre el uso del suelo

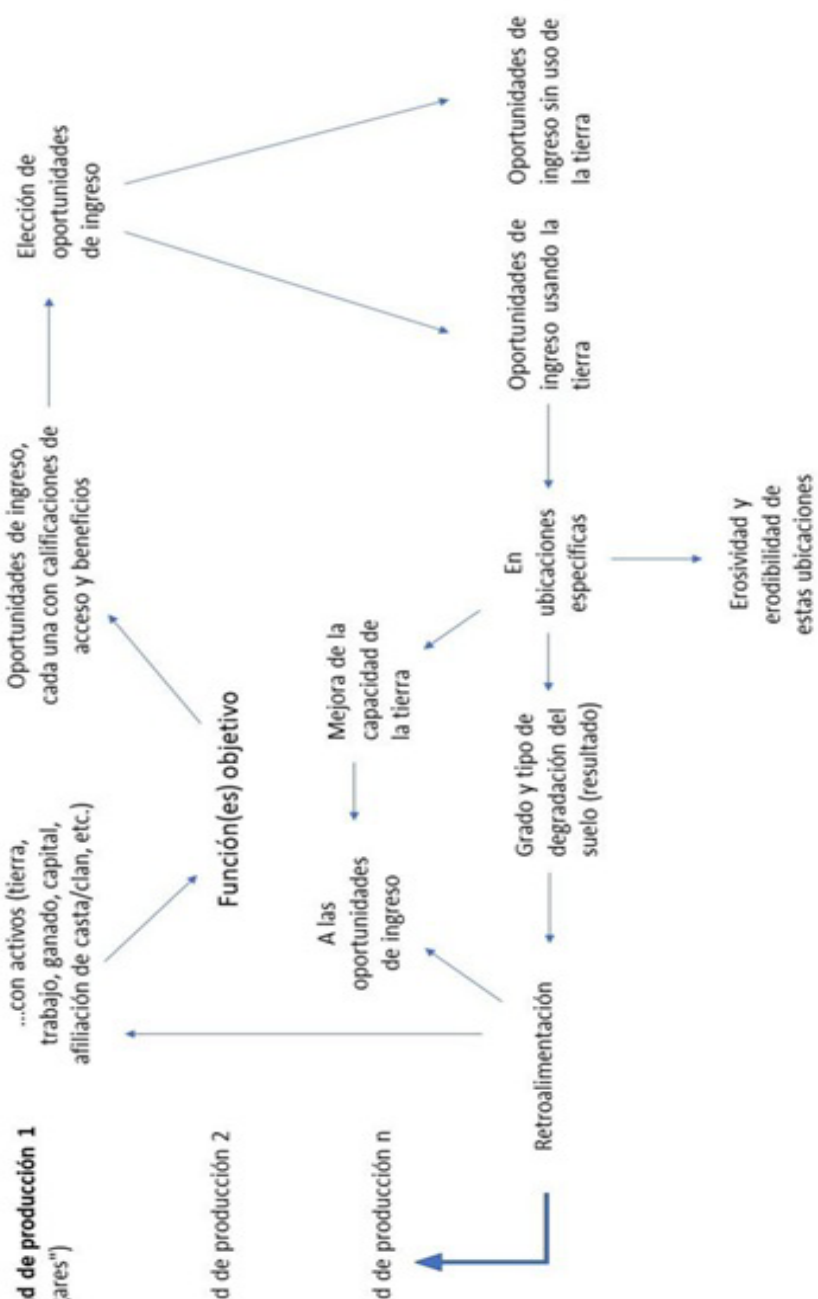
Esta sección delinea el enfoque de una agenda para la investigación con una base teórica implícita. Ya ha sido esbozado por Blaikie (1985), pero se desarrolla y se modifica aquí para proporcionar una base y una contribución para el material que se presenta a continuación. Su propósito es explicar la relación entre la economía política agraria, el manejo y uso de tierras, y el cambio ambiental. No es un modelo que analiza la economía política agraria en sí misma, aunque una de sus funciones centrales es rastrear el impacto de esa economía política en el uso de la tierra y el cambio ambiental. Asociados a varios componentes de los modelos, hay temas específicos sobre los cuales se han centrado debates teóricos, siendo algunos fundamentales para la economía política africana de hoy y que son también discutidos y vinculados con el modelo. De esta manera, el modelo proporciona una "columna vertebral" para el estudio de los cambios al acceso a los recursos, al que se le puede añadir material teórico y empírico.

El modelo empieza por identificar lo que en un inicio se pueden calificar como las "unidades de producción" (que podrían ser hogares de campesinos, "hogares de fogón", grupos extendidos pastoriles o granjas comerciales). El grado en que estas unidades tendrán que ser desagregadas dependerá del tipo y las decisiones de uso y de manejo de tierras que se tomen por parte de individuos dentro de la unidad. Cada unidad de producción cuenta con un abanico de ventajas tanto físico como humano (por ejemplo, el derecho a cultivar tierra de un tipo particular, mano de obra o herramientas; la educación, la afiliación a una tribu dominante o red de parentesco influyente), y la distribución de estas ventajas y recursos será determinada en gran parte por cuestiones de clase social y género.

Cada unidad identifica oportunidades de ingreso a las cuales se adjuntan determinadas condiciones de acceso. Muchas de ellas son simplemente diferentes sistemas de cultivo, cada uno con su requisito por unidad de tierra de mano de obra, semillas, gastos adquiridos, etc., pero otras no serán agrícolas. Cada oportunidad tiene una remuneración esperada (por ej. rendimientos de las cosechas, salario pagado por hora, beneficios para

su negocio). El conjunto de oportunidades de ingreso disponible para cualquier grupo de agricultores o pastores reflejará las condiciones ecológicas, el nivel del desarrollo técnico en la agricultura, y los niveles de desarrollo social y económico en la región. En Lesoto, estas oportunidades se concentran en trabajos asalariados en Sudáfrica para los hombres, y para las mujeres, en trabajo agrícola poco remunerado o en servicio gubernamental. En las regiones más remotas y con poca población, el abanico de oportunidades es diferente y consiste más bien en una gran variedad de cultivos dentro de sistemas de rotación de cultivos; a veces, estas regiones ofrecen una productividad relativamente alta de trabajo, pero a la vez con pocas oportunidades fuera de la agricultura.

FIGURA 2. RESUMEN DEL MODELO DE ACCESO A LOS RECURSOS.



Las elecciones que los agricultores realizan entre diferentes sistemas de cultivos y entre diferentes cultivos en un punto específico del tiempo solo necesitan modelarse en la medida que a) oportunidades específicas de ingresos pueden contribuir a la degradación de tierras y b) las posiciones de acceso son suficientemente diferenciadas en una región para imposibilitar a ciertos grupos la toma de decisiones de manejo que podrían reducir o detener esa degradación.

La manera en la que cada unidad de producción se acerca y prioriza estas oportunidades es, por supuesto, un tema central en la investigación de la economía agrícola, desde Chayanov (1966), Lipton (1968), Weeks (1970), Binswanger (1980), Evanson (1981) y muchos otros. Según qué funciones objetivas parecen más apropiadas para una unidad particular, se adoptan las oportunidades de ingreso, algunas de las cuales implican uso de tierras (resulta de interés para el análisis del mejoramiento o degradación de tierras), mientras en otros casos no. Después, estas decisiones se localizan en mapas en sitios donde existen varios grados de erosionabilidad, o fuerzas de erosión que actúan sobre ellos. Estas características "naturales" son las precipitaciones (en particular, su intensidad y estacionalidad) y las decisiones de uso de tierras que en conjunto determinan el grado de degradación de tierras, si lo hay. Los bucles de retroalimentación del "estado de la tierra" hacia la estructura y los activos de las unidades de producción, las oportunidades de ingreso y sus remuneraciones completan el circuito. Algunos de estos bucles de retroalimentación pueden resultar muy importantes para la historia futura de las relaciones socioambientales. La capacidad de la tierra puede mejorarse a través de la regeneración de sus nutrientes o la inversión en terraplenes o terrazas, que pueden aumentar el ingreso de las unidades de producción a futuro. O pueden disminuirse, lo cual reducirá los ingresos y provocará otros cambios en las funciones objetivas de las unidades involucradas (para una modelación de estas respuestas, véase más adelante). En general, el declive ambiental aumenta los costos de reproducción de la unidad productiva u "hogar", y por lo regular, son las mujeres quienes tienen que viajar más lejos para conseguir leña (Ki-Zerbo, 1981) o agua para uso doméstico, por lo que su fuerza de trabajo no estará disponible para las demás operaciones agrícolas.

En este modelo, la economía política agraria define "las reglas del juego". Como ya hemos indicado, las relaciones sociales de producción en una región particular definen la distribución y el acceso a los recursos junto con los flujos de productos o ganancias. En la medida que la política del hogar gira en torno al género y la edad, puede ser determinante en las decisiones acerca del uso de tierras, y la "unidad productiva" deberá definirse de manera más desagregada. El acceso a la tierra se regirá por ciertos tipos de tenencia de la tierra — tierras de pastoreo comunes, varios modelos legales— administrativos de asentamiento (por ej. "modelos" A a D en Zimbabwe), y varios grados de intervención estatal (con frecuencia en conflicto con jefes locales) en la asignación de tierras. Los precios de la producción y los recursos pueden fijarse por consejos paraestatales o comerciantes que actúen en un mercado libre o restringido, etc. Los precios relativos y los términos de intercambio entre mercancías necesarias adquiridas para el consumo, por un lado, y los recursos agrícolas y los productos primarios agrícolas para la venta, por el otro, constituyen un tema discutido por Bernstein (1977; 1979), donde la "restricción de la reproducción" aumenta los costos de la producción y obliga al campesino a intensificar dicha producción para la venta, lo que a su vez conduce al agotamiento de tierras y fuerza de trabajo. Hasta ahora esto es solo una hipótesis; queda por establecer en qué circunstancias estos términos de intercambio realmente conducen hacia el mal manejo de tierras, y esto a su vez a la degradación. La mayoría de los temas ya conocidos de la crisis africana, resumidos en JCAS (1986b) afectan a aquellos que toman decisiones de manejo o de uso de tierras. En cualquier situación particular, una combinación de estos temas será relevante y debe ser "operacionalizada" en los términos del modelo (en la especificación de la distribución de recursos, calificaciones de acceso para oportunidades particulares de ingreso, ganancias, etcétera).

Es necesario mapear el impacto de la economía política agraria en términos de decisiones precisas de uso de tierras en lugares concretos para rastrear el impacto de los cambios de la economía política más amplia en la degradación de tierras. Las imágenes por satélite, la fotografía aérea, las inspecciones de uso de tierras y los mapas topográficos son recursos muy importantes en este tipo de investigación. Por otra parte, algunos

aspectos relevantes, como la diferenciación entre productores, la comercialización, el crecimiento poblacional y otros cambios fundamentales, no pueden considerarse de manera simultánea y rastreados a través de las circunstancias de las personas hacia la tierra misma.

En la siguiente sección, el modelo dinámico proporciona un punto de entrada para comprender las decisiones de alterar las prácticas agrícolas y de pastoreo, y de conservar suelos y agua mediante cambios en los usos de la tierra como una respuesta a la degradación del suelo. Como se explicará, el acceso a los recursos resulta crucial en la toma de decisiones.

Respuestas de los usuarios de la tierra a la degradación del suelo

En la sección anterior se discutió un modelo recursivo de cambio agrario, uso y (posible) degradación de tierras. Claramente, debemos preguntarnos por qué en algunos casos la degradación continúa sin control, y en otros casos se llevan a cabo modificaciones exitosas de prácticas agrícolas. Como se explicó en la sección anterior, con frecuencia se ofrecen hipótesis únicas, pero la mayoría resultan ser solo hipótesis condicionales. En cambio, quizá hay que enfocarse en los detalles de la toma de decisiones frente al declive en la capacidad de la tierra o frente a otros retos, como el crecimiento demográfico. Cuando estas hipótesis se consideran en un contexto más amplio dentro del cual operan los agricultores o los pastores, con frecuencia son agregados, cancelándose o modificándose mutuamente en cada caso particular. Esta sección explica primero los pasos del modelo en general y luego algunos de sus aspectos sustantivos y teóricos de fondo en cada etapa.

La Figura 3 delinea el modelo y en el Cuadro 1 se enumeran los datos sociales y ambientales en un momento, que forman el contexto y los objetivos para la práctica del manejo de tierras (Cuadro 2). Los datos consisten en las características socioeconómicas de los responsables de la toma de decisiones (1, puntos 1-5).

Ya hemos indicado el rango de los procesos político-económicos que trabajan a través de las relaciones de producción, la operación del mercado,

etc., y estos procesos proporcionan la dinámica y la explicación para una representación estática de estos datos socioambientales en un momento dado. Una distribución de uso y gestión de tierras mediante diferentes unidades de producción y un área geográfica específica (de suelos diversos, pendientes, vegetación, etc.) resulta de estas necesidades. También existen varios temas importantes en el debate agrario y político-económico en África que se relacionan con estas necesidades. Primero, el asunto del conocimiento y de las destrezas de los agricultores y pastores en relación con las técnicas de conservación. ¿Por qué se afirma que existe una degradación generalizada en África cuando los agricultores poseen un conocimiento bien preciso del ambiente? Las estrategias de uso de la tierra por parte de agricultores y su conocimiento documentado por Allan (1967), Brokensha, Warren y Werner (1980), Watts (1984) y Richards (1985) resultan, a primera vista, difíciles de cuadrar con los informes sobre la desertificación y la erosión creciente. Una razón puede ser el predominio del empleo fuera de la agricultura temporal y empleos asalariados de "gerentes de tierras" o el "campesinado" (Reynolds, 1986), que altera radicalmente la cantidad de conocimiento indígena necesario. Tal vez las personas solo aprenden lo que les resulta útil. Los valores de uso, incluso en sociedades muy simples en lo material, son múltiples, y obtenerlos de la naturaleza requiere conocimiento detallado. Cuando el mercado empieza a reemplazar los valores de uso por valores de cambio, algunas partes de la economía del hogar empiezan a girar en torno a los recursos comprados. Ya no resulta tan necesario saber, por ejemplo, de las propiedades curativas de las plantas (se compran medicinas farmacéuticas en su lugar) o de las enfermedades del ganado (sería suficiente buscar la ayuda de un veterinario). Si gran parte de la economía del hogar gira en torno al trabajo asalariado y no en la agricultura, el conocimiento de la economía doméstica y no de la agricultura se vuelve más conveniente. Por ejemplo, el conocimiento de los Batswana, en el sureste de Botsuana, acerca de sus tierras de pastoreo y su ganado era un tanto deficiente, y su percepción de la indiscutible degradación de estas tierras, bastante limitada. Sin embargo, se preocupaban por mantener sus ingresos familiares y distribuir la mano de obra entre estas actividades (Abel, comunicación

personal). Por otra parte, sus vecinos, los bosquimanos, son aún extremadamente conocedores de su entorno, ya que ellos todavía requieren muchos valores de uso. ¿Podría ser que el mercado de trabajo descalifique los conocimientos prácticos especializados de agricultores y pastores, y que al mismo tiempo ofrezca medios alternos para obtener el sustento?

Para volver al siguiente paso del modelo, la resiliencia y la sensibilidad del bioma (3) determinan el grado en que la capacidad de la tierra se conserva o no como resultado de estas prácticas. Así pues, el punto 3 se refiere a una consideración eminentemente "basada en el lugar" de cómo la tierra resiste el uso y manejo continuo.

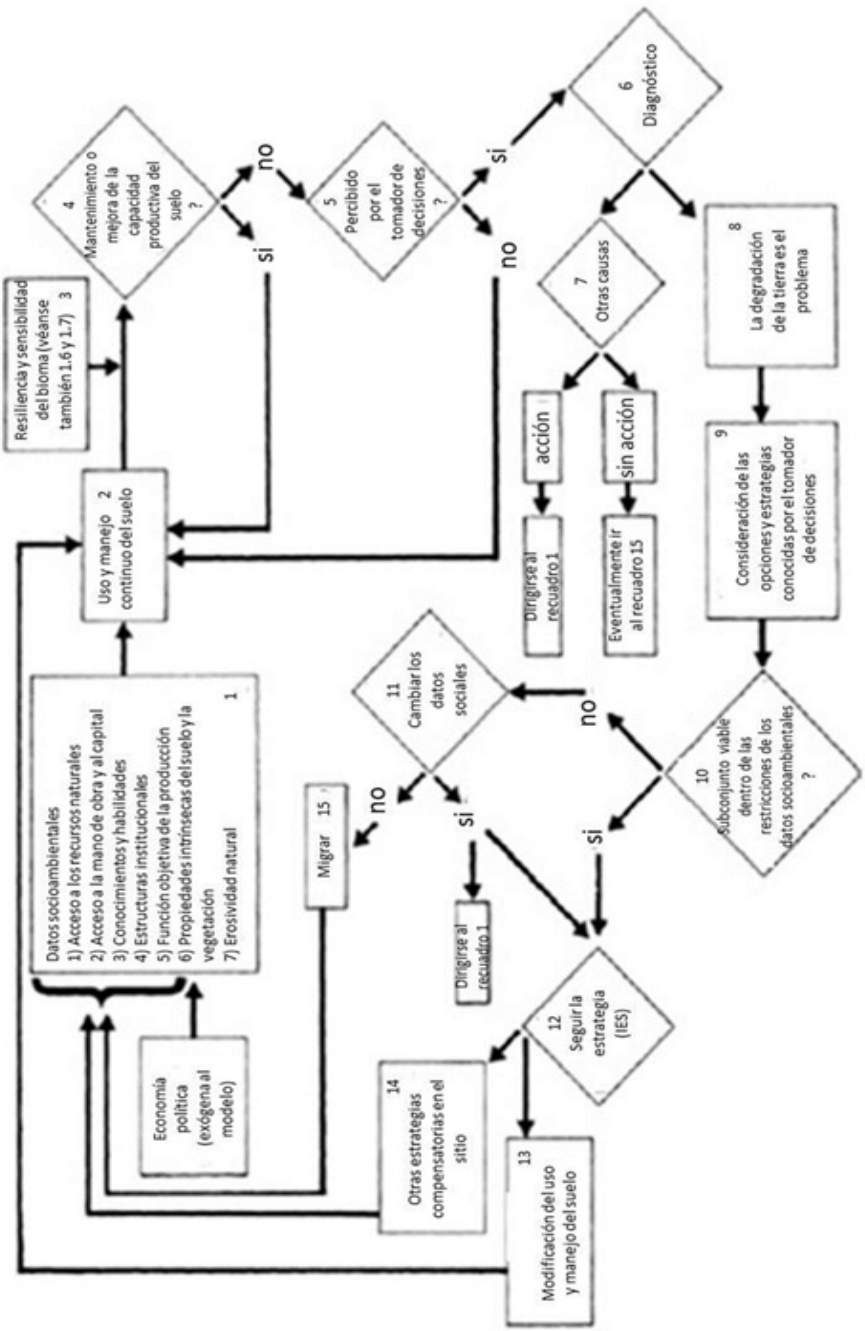


FIGURA 3. TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE TIERRAS.

Si la tierra resiste y la productividad se mantiene (4), no habrá motivo para alterar el uso de la tierra solo por la presencia de degradación. Sin embargo, si la capacidad de la tierra está en declive, entonces surge la pregunta de si los responsables de tomar decisiones perciben este deterioro o no (5). Hudson (1981) afirma: "En mi experiencia veo que el pequeño agricultor tiene poca idea de cuánto suelo está perdiendo", mientras otros autores reportan más bien la existencia de un conocimiento íntimo de lo que ocurre. Richards (1985), para África Occidental, Berry y Townshend (1973), para Tanzania, e IFPRI (1985), que proporciona una lista de métodos variados de conservación para toda África subsahariana, todos ofrecen ejemplos claros de esta última posición. Si la degradación no se diagnostica, entonces la práctica continuará sin interrumpirse hasta que la percepción del declive llegue a ser inevitable. En caso afirmativo, y posterior a la elaboración de un diagnóstico, es importante especificar la base sobre la cual se sustenta. Es posible que se esté produciendo una degradación de la tierra, lo que ocasionará como resultado que el bienestar de los hogares se vea amenazado. Pero, aparte de ello, puede que se diagnostique el resultado como consecuencia de otras causas diferentes a la degradación de tierras (7). Homewood (1985) ofrece un excelente ejemplo del Distrito Baringo en Kenia. La meseta y las colinas alrededor del pantano de Baringo han estado deteriorándose desde hace mucho tiempo como resultado del exceso de población y la erosión física, y esto es evidente para todos los observadores. Los asesores extranjeros diagnosticaron el problema como sobrepastoreo provocado por exceso de ganado y propusieron como solución disminuir el número de cabezas de ganado, los ranchos colectivos, etc., aunque hasta ahora estas propuestas no han sido muy exitosas. Los pastores ilchamus no perciben que la causa del lamentable estado de erosión y la reducción de la capacidad de las áreas secas en las colinas y mesetas sea relevante para ellos. La mayor parte del ganado de los ilchamus pasa una gran parte del año en la zona pantanosa, y solo lo mueven a las tierras altas erosionadas por periodos muy cortos.

El pantano provee pastos casi imposibles de sobrepasar (por ejemplo, Cynodon y Echinochlon, que son muy resilientes). Por tanto, el principal recurso terrestre del cual dependen no ha disminuido en su capacidad.

Sin duda, existe exceso de ganado, pero los ilchamus identifican que el problema reside en la capacidad diferenciada de distintos grupos sociales que utilizan el pantano para recuperar sus rebaños después de las pérdidas causadas por sequías. Los propietarios de ganado ausentes, quienes con frecuencia tienen trabajos de oficina u otras fuentes de ingreso, pueden adquirir ganado de forma muy rápida, mientras que para las personas locales no es tan sencillo. El resultado es que los ilchamus en realidad poseen menos ganado ahora que hace veinte años, y de allí deriva su pobreza. Otro ejemplo de un diagnóstico que no identificó la degradación de tierras como el problema se hizo por parte de los kikuyu, quienes enfrentaron degradación y políticas de conservación coercitivas en la década de los cincuenta por parte de las autoridades coloniales. El problema fue diagnosticado como una alienación de tierras por parte de los colonos, que derivó en una situación de sobrepoblación inmediata, y la solución política más atractiva era deshacerse de los británicos antes de iniciar obras costosas de conservación.

Antes se mencionaron las diferentes percepciones acerca de la degradación ambiental. En este modelo, el enfoque de la investigación son las percepciones de los usuarios de la tierra. La divergencia entre las percepciones de los usuarios de la tierra y la de los Gobiernos se explica en parte por algunos de los caminos tomados por los primeros y que conllevan escenarios de degradación continua del suelo. Sin embargo, en muchos casos no está tan claro si esta degradación ocurre o no, cuando no existe una divergencia importante en las definiciones de degradación de tierras. Dicho de otro modo, si los agricultores de las zonas comunales de Zimbabue volvieran a visitar de nuevo sus tierras dentro de treinta años, ¿diagnosticarían, usando sus propias percepciones y definiciones, una situación de degradación de tierras? Con frecuencia, la evidencia es muy contradictoria. Sandford (1982) ha revisado las evidencias de ese país y concluye que aún existe mucha incertidumbre. Aunque resulta obvio que han ocurrido cambios importantes en la vegetación (West, 1968; Wilson, 1986) y la erosión parece estar ocurriendo (Campbell *et al*., 1986; Kelly, 1971; 1973; Whitlow, 1986), también se debe notar que tanto la producción primaria (pasto) como la producción secundaria (ganado) nunca ha

sido tan alta como ahora en las tierras de pastoreo de las áreas comunales (Abel y Blaikie, 1988) ¿Resulta sostenible este ritmo de extracción? En el caso de Zimbabue, es probable que no (Kelly, 1973), pero quizá se tiene que reexaminar este punto de vista en lugares donde la tasa de lluvias es aun menor, como en Botsuana. Allí, según Biot (1988), no habrá un problema de erosión en el futuro previsible (algunos cientos de años). Así que, haciendo a un lado las diferencias de percepción, es difícil afirmar de manera inequívoca que los agricultores no aprecian la cantidad de suelo que están perdiendo, para adoptar la expresión de Hudson (1981). Simplemente, no podemos justificar una mirada "objetiva" que se defina en términos que puedan ser compartidos tanto por usuarios de tierra como por Gobiernos/externos.

Si regresamos ahora a las percepciones y diagnósticos de los propios usuarios de la tierra y su proceso de toma de decisiones, si se diagnostica que la degradación de tierras es la causa del declive en la capacidad de las tierras (8), entonces se considera un abanico de estrategias dentro del conocimiento del responsable de tomar decisiones (9) y se identifica un subconjunto factible (10). Este proceso dependerá de un número de factores en el conjunto de datos (1). En este punto, el perfil de acceso de la unidad de toma de decisiones es crucial. Muchas técnicas de conservación son muy absorbentes en el uso de tierra (véase Millington y Mutiso, 1986). En áreas densamente pobladas con acceso restringido a tierras nuevas, este factor puede significar que la construcción de terrazas de banco y franjas de hierba puedan estar más allá del alcance de muchas personas. Otras técnicas requieren mano de obra ardua e intensa, y los costos de oportunidad de trabajo pueden ser demasiados elevados en muchos casos en África. Cambios en la práctica agronómica en términos de selección de sitios, transferencia de suelos, momento de sembrar, elección del cultivo o la introducción de rastrojo de cobertura podrían ser las únicas soluciones. En Tanzania, Berry y Townshend (1973) identificaron muchos cambios así que fueron adoptados, pero todos sujetos a los patrones de acceso a recursos de los agricultores, mientras que otros introducidos por el Gobierno no fueron adoptados, al exigir recursos que los agricultores consideraban escasos.

En este punto es importante especificar con cuidado el ámbito de elección de los responsables de la toma de decisiones. Rara vez se trata de una consideración de costo-beneficio basada en la suma de las operaciones agrícolas/pastoriles (o "la granja"). Por tanto, difiere fundamentalmente de los agricultores de tiempo completo que tienen control exclusivo sobre sus parcelas y lo configura en el punto de partida para el tratamiento económico agrícola occidental que sirve como soporte para la toma de decisiones de conservación. En gran parte de África, estas decisiones suelen tomarse en un contexto de ingresos totales y el ocio de una colectividad mayor que la simple comunidad agrícola. De manera particular en el sur de África, los cambios en las prácticas agrícolas o pastoriles y las decisiones de conservación relacionadas con ellos deben tener en cuenta las necesidades de mano de obra que pueden encontrar ganancias más altas o seguras en el trabajo asalariado en otros lugares, y en consecuencia puede no estar disponible para las obras de conservación que requieren de una mano de obra intensa (IFPRI, 1985).

Se trata, entonces, de un análisis comparativo de costo-beneficio que los administradores de la tierra utilizan para favorecer la conservación relacionada con la economía del hogar más que solo con el uso de la tierra. También en muchas otras partes de África, la migración de la fuerza de trabajo representa una oportunidad de ingreso que, de manera acusada, aunque indirecta, afecta el uso y manejo de la tierra. Claramente existe una variedad enorme (Freund, 1984: 21), desde los migrantes que plantan árboles de cacao en África Occidental (Hill, 1963) a la difícil situación de las patrias (*homelands*) negras en Sudáfrica (Lipton, 1980), de la migración masiva masculina de Lesoto (Murray, 1981) a los pastores empobrecidos con oportunidades alternativas de empleo en Botsuana (Abel *et al*., 1985). En otro lugar, en esta serie de artículos Berry ha sugerido que la inestabilidad y la escasez recurrente de alimentos ha contribuido a una situación donde:

> Las personas se muestran reacias a inmovilizar su capital en activos fijos o en proyectos a largo plazo y prefieren mantener la materia prima… o especializarse en actividades con rápida rotación en lugar de aquellas

> con largos periodos de gestación… De modo que la cantidad de bienes y servicios en la economía se mantiene estable o se reduce, mientras que su "velocidad de circulación" aumenta.

Las implicaciones y el compromiso con los recursos actuales para el manejo efectivo de tierras a largo plazo y la mejora de ingresos agrícolas o pastoriles pueden imaginarse fácilmente. Asimismo, muchas zonas marginales que se han convertido en reservas de mano de obra para los negocios agrícolas o industriales de otros lugares han sufrido por deterioro ambiental, lo que a su vez implica que las ganancias comparativas de una inversión en conservación son aun menores (para una comparación entre países, véase Blaikie y Brookfield, 1987: 113-20). Es posible que no existan las estructuras institucionales para asegurar la cooperación entre agricultores y pastores, sin las cuales una estrategia particular llevada a cabo por un administrador de tierras individual no tendría éxito. La cuestión del mantenimiento de sistemas de manejo de recursos comunes eficaces tiene relevancia (Abel *et al*. 1985, para Botsuana; Sandford, 1983; Behnke, 1985) (2). Si ningún subconjunto factible de estrategias puede identificarse, podría ser posible alterar los datos sociales (11) para permitir que se adopte una estrategia, y la medida en que esto sea posible dependerá del poder económico y político (y en última instancia de las relaciones de producción) del administrador de tierras. Por ejemplo, en el pasado terratenientes, aristócratas feudales y autoridades coloniales obligaban a sus siervos o trabajadores a construir terrazas o a plantar árboles (por ejemplo, en Ruanda-Burundi bajo el dominio colonial belga). De manera alternativa, los agricultores pueden buscar enriquecer su conocimiento y destrezas con la ayuda de agentes de extensión (si los hay disponibles), o formar equipos cooperativos para las obras de conservación, la regulación de pastos, la reforestación, donde estos no existían antes. Si nada de esto resulta posible, la capacidad de la tierra continúa en declive y por lo menos algunos administradores de tierras se verán obligados a irse (15).

Si se identifican estrategias factibles, entonces se pueden adoptar (12) y ocurren modificaciones en las prácticas de uso y manejo de la tierra (13), que son, a su vez, insumos en el uso y gestión de suelos (2) en el momento t+1.

Es importante destacar que los datos sociales y ambientales (resumidos en el Cuadro 1) están en constante cambio; conceptualmente, son el resultado del modelo de acceso a los recursos descrito antes. Por ejemplo, los cambios en la población humana o ganadera quizá requerirán de la intensificación de la agricultura, reducciones en el barbecho, un aumento en el flujo de nutrientes importados (por ej. estiércol agrícola, hojarasca forestal, fertilizantes químicos). El proceso continuo de transición desde los cultivos itinerantes con sistemas de barbecho hacia el cultivo permanente, como ocurre en la actualidad en muchas partes de África, es un buen ejemplo y supone un desafío constante para el manejo de tierras, y un impulso exógeno para el cambio en el recuadro 2. Cualquier resultado en el control sobre los recursos o en la conservación de suelos y agua es determinado crucialmente por la economía política de la sociedad agraria involucrada. El proceso de intensificación en el uso de tierras (resultado de fuerzas como el crecimiento poblacional, oportunidades de mercado y la marginalización de grupos débiles) puede ahora ser visto como determinado por el patrón de acceso a los recursos. Aunque la intensificación puede resultar de la alteración de los patrones de acceso (y en algunos casos por patrones reducidos), también exige un conjunto nuevo de recursos. En ocasiones, las personas implicadas simplemente no disponen de ellos. El acceso a los nutrientes es un factor central que impide a muchos lograr una transformación agrícola exitosa y los atrapa en un ciclo de degradación de tierras sin tratar. La interacción entre agricultores y pastores es también importante, y existen muchos ejemplos de una interrupción de las relaciones simbióticas entre grupos pastoriles, entre quienes proporcionan estiércol, y los grupos agricultores, que proveen pastos (Scott, 1984).

En conclusión, este artículo ha defendido un enfoque más "específico para el lugar" en relación con el tema de la degradación de tierras que tiene la capacidad de tener en cuenta tanto los cambios mayores en la economía política agraria que operan en las escalas nacional e internacional como los detalles de la toma de decisiones en el plano hogar/grupo para el uso y manejo de tierras. Es una agenda de investigación basada en un modelo general de control cambiante sobre los recursos y las decisiones sobre el uso de la tierra, vinculado con otro modelo que identifica el proceso de

la toma de decisiones frente a la degradación de tierras. Implica desafíos, ya que relaciona la economía política con el modelado cuantitativo normalmente asociado con la ciencia social positivista y la economía agrícola normativa. Desde mi perspectiva, esta contradicción resulta falsa, ya que los modelos presentados aquí y la teoría detrás de la recolección de datos (categorías, etiquetas, la elección de intervalos cuantitativos, etc.) son tan flexibles como para dar cabida a un enfoque ideológico explícito pero verificable cuantitativamente del cambio social y ambiental en África.

Referencias[5]

Abel, N. O. J. y P. M. Blaikie, 1988. "Managing common property resources in rural development: the case of Zimbabwe and Botswana". Informe final. Overseas Development, Administration.

Abel, N. O. J., M. Flint, N. Hunter, D. Chandler y Y. Merafe. 1985. *The problems and possibilities of communal land management in Ngwaketse district: a case study.* Informe resumido. International Livestock Centre for Africa.

Abel, N. O. J., N. Hunter, D. Chandler, M. Flint, T. Bagwasi y Y. Merefoe. 1985. *An investigation into the problems and possibilities of communal grazing management in Ngwaketse central agricultural district.* International Live-Stock Centre For África, Proyecto de Ganadería Integrada.

Abel, N. O. J. y M. Stocking.1987. A rapid method for assessing rates of soil erosion and sediment yields from rangeland: an example from Botswana. *Journal of Range Management*, *40*(5), 460-466.

Allan, W. 1967. *The African husbandman*. Oliver & Boyd.

5 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original. Finalmente, algunas referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Anderson, D. M. 1984. Depression, dust bowl, demography and drought: the colonial state and soil conservation in East Africa during the 1930s. *African Affairs*, *83*(322), 321-343.

Anderson, D. M. y A. Millington. 1986. Political economy of soil conservation in anglophone Africa [ponencia]. Reunión anual del Institute of British Geographers. University of Reading.

Behnke, R. H. 1985. *The dynamics of open-range management and property rights in pastoral Africa.* Overseas Development Institute.

Beinhart, W. 1984. Soil erosion, conservationism and ideas about development: a Southern African exploration 1900-1960. *Institute of South African Studies*, *2*(1), 52-84.

Belshaw, D. G. R. 1979. Taking indigenous technology seriously: the case of inter-cropping techniques in East Africa. *Institute of Development Studies Bulletin*, *10*(2), 24-7.

Bernstein, H. 1977. Notes on capital and peasantry. *Review of African Political Economy*, *4*(10), 60-73.

Bernstein, H. 1979. African peasantries: a theoretical framework. *Journal of Peasant Studies. 6*(4), 420-444.

Berry, L. y J. Townshend. 1973. Soil conservation policies in the semi-arid regions of Tanzania: a historical perspective. En A. Rapp, L. Berry y P. Temple (eds.). *Studies in soil erosion and sedimentation in Tanzania. Research monograph no. 1* (pp. 243 - 251). Bureau of Resource Assessment and Land Use Planning, University of Dar es Salaam.

Berry, S. S. 1984a. The food crisis and agrarian change in Africa: a review essay. *African Studies Review*, *27*(2), 59-112.

Berry, S. S. 1984b. *Households decision-making and rural development: do we need to know more?* Development Discussion Paper No.167. Harvard Institute for International Development.

Berry, S. S. 1986. Social institutions and access to resources [ponencia]. *29 Annual Meeting of African Studies Association*, Madison, Wisconsin.

Biggs, S. D. 1983. Monitoring and control in agricultural research systems. *Research Policy*, *12*, 37-59.

Biggs, S. D. 1984. Awkward but common themes in agricultural policy. En E.J. Clay and B.B. Schaffer (coords.). *Room for manoeuvre - an explanation of public policy in agriculture and rural development* (pp. 59-77). Heinemann Educational Books.

Binswanger, H. P. 1980. "Attitudes towards risk: experimental measurement in rural India", *American Journal of Agricultural Economics*, *62*(3), 395-407.

Biot, Y. 1988. Modelling productivity losses caused by erosion [ponencia]. *5th International Soil Conservation Conference*, Bangkok, 18-25 de enero.

Blaikie, P. M. 1985. *The political economy of soil erosion in developing countries*: Heinemann.

Blaikie, P. M. 1987. The SADC countries historical experience of soil conservation and people's participation in it: some lessons for future policy, En *History of Soil Conservation in the SADC Region*. South African Development Coordination Conference, Soil and Water Conservation and Land Utilization.[6]

Blaikie, P. y H. Brookfield. 1987. *Land degradation and society*. Methuen.

Bojö, Jan. 1986. An introduction to cost-benefit analysis of soil and water conservation projects, Report no. 6. South African Development Coordination Conference, Soil and Water Conservation and Land Utilization.

Brokensha, D., Warren, D., y Werner, O. 1980. *Indigenous knowledge systems and developments*. University Press of America.

6 N. de T. La referencia original no especifica los números de página del capítulo citado. Esta traducción mantiene los datos de referencia presente en el texto de origen.

Campbell, B. M., B. P. du Toit y C. A. M Atwell. 1986. *Relationships between the environment and basic needs satisfaction in the Sabi Valley, Zimbabwe*. University of Zimbabwe.

Chayanov, A. 1966. *The theory of the peasant economy*. R. D. Irwin.

Copans, J. 1983. The Sahelian drought: social sciences and the political economy of underdevelopment. En K. Hewitt (ed.). *Interpretations of calamity* (pp. 83-97). Allen & Unwin.

Ekejuiba, F. 1984. "Contemporary households and major socio-economic transitions in eastern Nigeria: toward a reconceptualization of the household". En J. I. Guyer y P. E. Peters (eds.). *Conceptualizing the household* (pp. 9-13). Harvard University Press.

Eltringham, S. K. 1985. The history of conservation in Uganda [ponencia]. *The Scramble for Resources: Conservation in Africa, 1884-1984*. African Studies Centre, Cambridge, 19-20 de abril.

Evanson, R. E. 1976. On the new household economics. *Journal of Agricultural Economics and Development*, *6*, 87-103.

Evanson, R. E. 1981. "Food policy and the new home economics". *Food Policy*, *6*(3) (agosto), 180-93.

Fahlen, A. 1985. *An evaluation of soil conservation practices in Nyeri district in Kenya*. Documento de trabajo 31. Swedish University of African Sciences.

FAO. 1986. "Ethiopian highlands reclamation Study". Executive Summary, UTF/ETH/037/ETH.

Fournier, F. 1960. *Climate and erosion*. Presses Universitaries de France.

Franke, R., y B. H. Chasin. 1980. *Seeds of famine: ecological destruction and the development dilemma in the western Sahel*. Allenheld, Osman.

Freund, B. 1984. Labor and labor history in Africa: a review of the literature. *African Studies Review*, *27*(2), 1-58.

Guyer, J. I. y P. Peters. 1984. "Conceptualizing the household: issues of theory and method application". Committee on African Studies

of the American Council of Learned Societies and the SSRC. Harvard Workshop, 2-4 de noviembre.

Hill, P. 1963. *Migrant cocoa farmers of Southern Ghana*. Cambridge University Press.

Homewood, K. 1985. Swamp grazing in Baring [ponencia]. African Studies Association of the United Kingdom, University College London, 18 de septiembre.

Hudson, N. W. 1981. "Non-technical constraints on soil conservation". South East Asian Regional Symposium on Problems of Soil Erosion and Sedimentation, Bangkok.

ICIHI (Independent Commission on International Humanitarian Issues). 1986a. *The vanishing forest: the human consequences of deforestation*. Zed.

ICIHI (Independent Commission on International Humanitarian Issues). 1986b. *The encroaching desert: the consequences of human failure*. Zed.

International Food Policy Research Institute. 1985. *Soil and water conservation in Sub-Saharan Africa: issues and options*. Reporte del Centre for Development Cooperation Services, Free University, Ámsterdam, noviembre.

International Union for the Conservation of Nature. 1980. *World Conservation Strategy: living resource conservation for sustainable development*. IUCN.

JCAS. 1986a. "Project on African agriculture: crisis and transformation". Ensayo de Joint Committee on African Studies of the American Council of Learned Societies and the Social Science Research Council.

JCAS. 1986b. "Project on African agriculture: crisis and transformation: project description". Ensayo de Joint Committee on African Studies of the American Council of Learned Societies and the Social Science Research Council.

Kelly, R. D. 1971. "Progress report on the investigation of veld production in the south-eastern low veld of Rhodesia", septiembre.

Kelly, R. D. 1973. *A comparative study of primary production under different kinds of land use in South-Eastern Rhodesia* [Tesis de doctorado, University of London].

Ki-Zerbo, J. 1981. "Women and the energy crisis in the Sahel". *Unasylva*, *33*(133), 5-10.

Klepper, R. 1980. The state and peasantry in Zambia. En *The Evolving Structure of Zambian Society, 120-50*. Edinburgh: Centre of African Studies.

Lachenmann, G. 1985. Ecology and social structure in the Sahel. *Economics: a biannual coll. of recent German contributions to the field of economic science; a series iss. in the service of scientific cooperation*, *32*, 80-106.

Lachenmann, G., Hottler, Kohn, Kreft, Mayer y Von Stackelberg. 1985. *Ecologie et développement socio-économique: étude des interdépendances entre la détérioration de l'environnement et les activités quotidiennes de L'homme dans le Zone Lacustre au Mali*. Institut Allemand de Développement.

Lal, R. 1984. Productivity assessment of tropical soils and the effects of erosion. En F. R. Rijsberman y M. G. Wolman (coords.). *Quantification of the effects of erosion on soil productivity in an international context* (pp. 70-94). Delft Hydraulics Laboratory.

Lamb, R. y M. Seifulaziz. 1983. "Soil erosion, real cause of Ethiopian famine". *Environmental Conservation*, *2*, 157-159.

Lipton, M. 1968. "The theory of the optimising peasant". *Journal of Development Studies*, *4*, 327-351.

Lipton, M. 1980. Man of two worlds: migrant labour in South Africa. *Optima*, *29*(2-3), 72-202.

Low, A. 1986. *Agricultural development in Southern Africa*. James Currey.

Marter, A. y D. Honeybone. 1976. *The economic resources of rural households and the distribution of agricultural development*. Rural Development Studies Bureau. University of Zambia.

Millington, A. C. 1985. Environmental degradation, soil conservation and agricultural policies in Sierre Leone, 1895-1984 [ponencia]. *The Scramble for Resources: Conservation Policies in Africa, 1884-1984*, African Studies Centre, Cambridge, 19-20 de abril.

Millington, A. C. y G. Mutiso. 1986. Appropriate technology: the political economy of technical choice in African agriculture [ponencia]. *Conference on African Political Economy*, Liverpool, 26-27 de septiembre.

Mlia, J. R. N. 1987. "The history of soil conservation in Malawi". En *History of Soil Conservation in the SADCC Region*, Reporte n° 8. Maseru, Lesotho: *South African Development Coordination Conference, Soil and Water Conservation and Land Utilisation*.

Murray, C. 1981. *Families divided*. Cambridge University Press.

Naciones Unidas. 1977. *Desertification: its causes and consequences, background papers to UN Conference on Desertification*. Pergamon Press.

Nobe, G. K. y D. W. Seckler. 1979. An economic and policy analysis of soil-water problems and conservation programme in the Kingdom of Lesotho". *LASA Research Report No. 3*. Ministry of Agriculture.

Ostberg, W. 1986. *The Kondoa transformation: coming to grips with soil erosion in central Tanzania*. *Research Report no. 76*. Scandinavian Institute of African Studies.

Prothero, M. R. 1972. *People and land in Africa South of the Sahara*. Oxford University Press.

Reynolds, N. 1986. Zimbabwe: a case study of agricultural reconstruction. [Inédito].

Richards, P. 1983. Ecological change and the politics of African land use. *African Studies Review*, *26*(2), 1-72.

Richards, P. 1985. *Indigenous agricultural revolution*. Hutchinson Education.

Richards, P. 1986. What's wrong with farming systems research? [ponencia]. Conferencia de la Development Studies Association, University of East Anglia, Norwich, 15-16 de septiembre.

Robinson, D. A. 1978. *Soil erosion and soil conservation in Zambia. Occasional Study no. 9.* University of Zambia.

Robinson, D. A. 1985. Motives and policies for soil conservation in Zambia, 1938-1978 [ponencia]. *The Scramble for Resources: Conservation Policies in Africa, 1884-1984*, African Studies Centre, Cambridge, 19-20 de abril.

Roder, W. 1977. *Environmental assessment of the rural development area program, Swaziland.* University of Cincinnati Press.

Ruthenberg, H. 1983. *Farming systems in the tropics*. Oxford University Press.

Ruttan, V. W. 1981. An induced innovation interpretation of technical change in agriculture in developed countries [ponencia]. *Seminario "Cambio técnico en el agro latinoamercano: situación y perspectivas en la década de 1980*", Coronado, Costa Rica.

Ruttan, V. W. 1982. *Agricultural research policy*. University of Minnesota Press.

Sandford, S. 1982. *Livestock in the communal areas of Zimbabwe*. Ministry of Lands, Resettlement and Rural Development / Overseas Development Institute.

Sandford, S. 1983. *Management of pastoral development in the third world*. John Wiley.

Schlippe, P. de. 1956. *Shifting cultivation in Africa*. Routledge & Kegan Paul.

Scott, E. 1984. Life before the drought: a human ecological perspective. En E. Scott (ed.). *Life before the drought* (pp. 1-28). Allen & Unwin.

Seckler, D. 1987. "Economic costs and benefits of degradation and its repair". En P. M. Blaikie y H. C. Brookfield (eds.). *Land degradation and society* (pp. 84-96). Methuen.

Shepherd, A. W. 1984. Nomads, farmers and merchants: old strategies in a changing Sudan. En E. P. Scott (coord.). *Life before the drought* (pp. 77-100). Allen & Unwin.

Sinclair, A. R. E. y J. M. Fryxell. 1985. The Sahel of Africa: ecology of a disaster. *Canadian Journal of Zoology*, *63*, 987-94.

Stocking, M. 1978. "The prediction and estimation of erosion in sub-tropical Africa: problems and prospects". *Geo-Eco-Trop*, 2: 161-74.

Stocking, M. 1984. Soil conservation policy in colonial Africa and its continuation, effects and lessons [ponencia]. *Simposio History of Soil and Water Conservation*. Missouri, Columbia, 23-26 de mayo.

Stocking, M. 1985. Soil conservation policy in colonial Africa. *Agricultural History*, *59*(2), 148-61.

Stocking, M. A. 1987. "Measuring land degradation". En *Land degradation and society*. Editado por P. M. Blaikie y H. C. Brookfield. Londres: Methuen.

Stocking, M. A. y L. Peake. 1985. Erosion-induced loss in soil productivity: trends in research and international cooperation [ponencia]. *4th International Conference on Soil Conservation*. Maracay, Venezuela, 3-9 de noviembre.

Strakhov, N. M. 1967. *Principles of lithogenesis*. Oliver & Boyd.

Temple, P. 1973. "Soil and water conservation policies in the Uluguru mountains, Tanzania". En A. Rapp, L. Berry y P. Temple (coords.). *Studies in soil erosion and sedimentation in Tanzania* (pp. 105-109). Research Monograph no. 1. Bureau of Resource Assessment and Land Use Planning, University of Dar es Salaam.

Thompson, M. y M. Warburton. 1985. Uncertainty on a Himalayan scale. *Mountain Research and Development*, *5*(2), 115-35.

Timberlake, L. 1984. *Africa in crisis*. Earthscan.

Turner, S. D. 1982. Soil conservation: administrative and extension approaches in Lesotho. *Agricultural Administration*, *9*, 147-62.

Uhlig, A. 1984. "Hunger and erosion: Africa's vicious cycle". *Swiss Review of World Affairs*, *34*(7), 12-20.

USAID. 1981. *Draft environmental profile on Ruanda*. Arid Lands Information Centre.

USAID. 1985. *A soil and water conservation project in two sites in Somalia: seventeen years later. AID Project Impact Evaluation Report No. 62*. Washington, D.C.

Walling, D. E. 1984. "The sediment yield of African rivers". En D. E. Walling, S. S. D. Foster and P. Wurzel (eds.). *Challenges in African hydrology and water resources* (pp. 265-283). International Association of Hydrological Sciences.

Watts, M. 1984. "The demise of the moral economy: food and famine in a Sudano-Sahelian region in historical perspective. En *Life before the drought,* coordinado por E. P. Scott. Boston: Allen & Unwin.

Watts, M. 1986. Drought, environment and food security: some reflections on peasants, pastoralists and commoditisation in dryland West Africa. [Inédito].

Weeks, J. 1970. "Uncertainty, risk and wealth and income distribution in peasant agriculture". *Journal of Development Studies*, *7*(1), 28-35.

West, O. 1968. The vegetation of southern Matabeleland: a study of the reasons for its present degradation and possible means of rehabilitation. [Inédito].

Whitlow, R. 1986. *A natural erosion survey of Zimbabwe*. [Inédito].

Willett, A. B. J. 1981. *Agricultural group development in Botswana*. Agricultural Management Associations, Ministry of Agriculture.

Wilson, K. 1986. History, ecology and conservation in Southern Zimbabwe. [Inédito].

3. Ecología política. Una agenda de investigación emergente en los estudios del tercer mundo[1]

Raymond L. Bryant

Resumen: Este artículo es una exploración preliminar de la ecología política del tercer mundo. En la primera parte se desarrolla un marco para comprender la agenda de investigación emergente que engloba tres ejes críticos de indagación. Estas son las fuentes contextuales del cambio ambiental, el conflicto en torno al acceso y las ramificaciones políticas del cambio ambiental. Cada uno de estos ejes de indagación se aborda mediante una estrategia dual; primero se revisan las investigaciones relevantes, luego se discuten los problemas analíticos centrales. A lo largo del artículo se sugiere que la ecología política del tercer mundo representa un intento de desarrollar un entendimiento integrado de cómo las fuerzas ambientales y políticas interactúan para mediar el cambio social y ambiental. En un mundo en el que los problemas ambientales adquieren cada vez mayor significado político, esta forma de entendimiento integrado es necesaria desde hace tiempo.

Introducción

En el futuro, la interacción entre las fuerzas ambientales y políticas mediará el desarrollo del tercer mundo[2] de formas antes nunca vistas. Por tanto, a medida que los problemas ambientales adquieren mayor importancia política, es cada vez más apremiante la necesidad de un enfoque analítico que integre el entendimiento ambiental y el político. En la década de los ochenta, algunos investigadores con distintos antecedentes académicos

1 Publicado originalmente en Rayond L. Bryant, 1992, "Political ecology: an emerging research agenda in Third-World studies", *Political Geography*, 11(1): 12-36

2 El término "tercer mundo" (para diferenciarlo del "primer mundo") se utiliza como sinónimo de "Norte-Sur". En este caso, se refiere a los países en vías de desarrollo de Asia, África y América Latina.

e institucionales comenzaron a examinar la relación entre las actividades ambientales y políticas en regiones de Asia, África y América Latina.[3] A raíz de esto, surgió un cuerpo de trabajo que podría denominarse ecología política del tercer mundo. Este ensayo sostiene que dichas obras nos sugieren una agenda de investigación fructífera para los estudios del tercer mundo.

Diversas investigaciones han resaltado algunos aspectos de esta agenda. Emel y Peet (1989), por ejemplo, revisan trabajos sobre el manejo de recursos y riesgos naturales. Watts (1989) y Berry (1989a) consideran las investigaciones del movimiento africano de estudios agrarios. Beinart (1989; 1990) aborda las investigaciones recientes sobre la caza y la conservación en África colonial. Redflict (1984; 1987), Blaikie y Brookfield (1987b), Blaikie (1988b; 1989b) y Adams (1990a) también exploran aspectos de la ecología política del tercer mundo.[4] Estas obras nos ofrecen una nueva manera de entrever cómo se está integrando en diversos entornos el entendimiento político y ambiental. Sin embargo, no brindan un abordaje general; en consecuencia, los parámetros de la agenda de investigación emergente no han sido examinados de manera sistemática. Este ensayo, una exploración preliminar de la ecología política del tercer mundo, subraya la aclaración analítica por encima de la evaluación crítica.[5] Al analizar dichas investigaciones, el objetivo no es exagerar la coherencia de esta agenda emergente, sino subrayar los temas comunes y sugerir áreas para seguir explorando. Asimismo, este ensayo constituye una evaluación preliminar, debido a que no pretende abarcarlo todo. Con estas advertencias en mente, la estructura del argumento se puede resumir de la siguiente manera. Primero, después de una introducción preliminar a la ecología política del tercer mundo, se desarrolla un marco para entender la agenda de investigación emergente y se engloban tres ejes críticos de indagación: las fuentes contextuales del cambio ambiental, el conflicto en torno al

3 Por ejemplo, véase Blaikie y Brookfield (1987a), Little y Horowitz (1987), Redclift (1984; 1987) y Repetto y Gillis (1988).

4 Véase también Marston (1983) y Falkus (1990). Johnston (1989), Dryzek (1987), Benton (1989) y Corbridge (1986) son de interés general.

5 Emel y Peet (1989) y Adams (1990a) examinan de forma crítica varias grandes obras, notablemente de Watts (1983b) y Blaikie (1985).

acceso y las ramificaciones políticas del cambio ambiental. Al examinar cada eje, el ensayo adopta una estrategia dual: revisar las investigaciones relevantes y luego explorar los problemas analíticos centrales. De esta manera, el objetivo central es analizar los tres aspectos clave de la agenda emergente. En la última sección, se resume el enfoque del ensayo y se sugieren varias implicaciones para investigaciones futuras.

Un marco para la comprensión

Al revisar las investigaciones sobre la relación entre lo humano y el medio ambiente, Deutsch (1977: 359) lamentó que "los procesos e instituciones políticas rara vez se mencionan directamente y es aún más raro que se analicen a detalle. Sin embargo, la materia prima de la política está inevitablemente implicada en casi cualquier problema ecosocial". Sólo recientemente esta interacción dinámica de fuerzas ambientales y políticas ha recibido atención académica. Fue apenas en la década de los ochenta que la ecología política del tercer mundo surgió como una agenda de investigación. Conforme se desarrolle el marco, se discutirán los elementos claves de esta agenda. Sin embargo, primero se debe abordar el enfoque general de la ecología política del tercer mundo y considerar sus posibles interpretaciones.

En un sentido amplio, la ecología política del tercer mundo se puede definir como el intento por entender las fuentes, condiciones y ramificaciones políticas del cambio ambiental. Específicamente, Blaikie y Brookfield (1987b: 17) ofrecen una útil definición funcional:

> La frase "ecología política" combina las preocupaciones de la ecología y la economía política bajo una definición amplia. Juntas engloban la dialéctica entre sociedad y recursos terrestres que está en constante movimiento, así como al interior de clases y grupos dentro de la misma sociedad.

Hay mucho de elogiable de esa definición, en especial si se extiende para englobar no solo lo "terrenal", sino lo "ambiental" en un sentido más amplio. Sin embargo, al utilizar esta interpretación, debemos evitar el reduccionismo

económico. Como tal, el reduccionismo ha sido una característica recurrente en la ecología política del tercer mundo, y por ende es importante repasar brevemente las maneras en las que el reduccionismo económico simplifica la realidad y disminuye la precisión analítica.

Existen al menos tres maneras en las que el reduccionismo económico puede debilitar la investigación en ecología política del tercer mundo. Primero, el reduccionismo no logra atribuir un significado explicativo a los factores ecológicos.[6] Por consiguiente, como observa Blaikie (1989a: 22) en el contexto de la desertificación africana:

> Cualquier intento por atribuir la desertificación a "fuerzas naturales" más allá de la agudeza del capitalismo, es descartado como una mera maniobra de distracción burguesa. Esta polarización es simplista e innecesaria ya que es la dialéctica entre el cambio medioambiental y el social la que nos debe brindar el contexto para analizar la degradación de la tierra.

En segundo lugar, el reduccionismo económico no toma en cuenta otras fuentes de cambio ambiental. Al equiparar la acción social con el desarrollo capitalista, no sólo niega factores ecológicos, sino también devalúa el papel y la importancia de las fuerzas estatales e interestatales. Por tanto, empobrece el entendimiento de la interacción compleja entre fuentes contextuales que juntas se relacionan con el cambio ambiental y son afectadas por él, aunque de formas diferenciadas y a menudo contradictorias.

Por último, el reduccionismo económico también excluye de una consideración seria a los "sin poder": los campesinos y otros grupos socialmente desfavorecidos. Al igual que con el ambiente y el Estado, el papel de los campesinos se descarta como insignificante en términos analíticos. Y, no obstante, tales premisas están mal fundadas —los "sin poder" no siempre son tan incapaces de resistir como pueden sugerir las evaluaciones reduccionistas—.[7] Como nos recuerda Giddens (1979: 149): "Todas las relaciones de poder, o relaciones de autonomía y dependencia, son

6 Véase Richards (1983) y Blaikie (1989a).

7 Por ejemplo, resistencia local a la construcción de una presa en Tailandia (Hirsch y Lohmann 1989); y otras instancias referidas más abajo.

recíprocas: sin importar lo amplia que sea la asimetría en la distribución de los recursos involucrados, todas las relaciones de poder manifiestan autonomía y dependencia 'en ambas direcciones'".

Lo anterior subraya los peligros del reduccionismo económico. En este artículo, entonces, tenemos una comprensión incluyente de la ecología política del tercer mundo, bajo la premisa de que debe ser sensible a la interacción entre fuerzas sociopolíticas diversas y a la relación de estas fuerzas con el cambio ambiental. El siguiente marco explora las complejidades de la interacción política y ambiental; por tanto, su enfoque "busca unificar, pero mediante una apreciación de la pluralidad de propósito y de la flexibilidad en la explicación" (Blaikie y Brookfield, 1987b: 25).

Entonces, si tomamos primero las fuentes contextuales del cambio ambiental, se pueden identificar los siguientes temas: políticas de Estado, relaciones interestatales y capitalismo global. Estos temas reflejan el creciente impacto en el ambiente de las fuerzas nacionales y trasnacionales en un mundo que cada vez presenta más interdependencia política y económica. En contraste, el segundo elemento del marco aborda los conflictos en torno al acceso y destaca las luchas ambientales específicas de una determinada localidad. Al tomar en cuenta las dinámicas históricas, así como las contemporáneas del conflicto, este eje de investigación ilustra cómo aquellos "sin poder" luchan por proteger las bases ambientales de su sustento. El último eje de indagación considera las ramificaciones políticas del cambio ambiental. Al abordar temas de impacto socioeconómico y proceso político, este elemento del marco se enfoca en un área a menudo menospreciada de la interacción entre lo humano y lo ambiental: en concreto, los importantes efectos del cambio ambiental en las relaciones socioeconómicas y políticas.

Sin embargo, se debe actuar con precaución al abordar las ramificaciones políticas del cambio ambiental. Los análisis sobre cómo el cambio ambiental podría afectar a diversos grupos socioeconómicos y procesos políticos concretos difieren del determinismo ambiental y nunca deben confundirse con él. Como han demostrado Peet (1985) y otros, el determinismo ambiental es mejor entendido como una expresión de sentimientos

racistas que como un ejemplo de investigación geográfica seria. En contraste, la discusión de las ramificaciones políticas del cambio ambiental está diseñada para complementar la comprensión de los demás elementos del marco y las fuentes contextuales del cambio ambiental y del conflicto en torno al acceso.

La yuxtaposición de estos ejes de indagación en un solo marco subraya la naturaleza de la dependencia en la escala de la investigación en ecología política del tercer mundo. La discusión sobre las "fuentes contextuales", los "conflictos en torno al acceso" específicos a una localidad y las "ramificaciones políticas" debe englobar un reconocimiento de las distintas escalas sociopolíticas, económicas y ecológicas involucradas.[8] Y, como ilustra ahora este artículo, tal multiplicidad de escala garantiza una diversidad de enfoques y conclusiones.

Fuentes contextuales de cambio ambiental

En la ecología política del tercer mundo, la investigación ha examinado de forma extensiva, si bien dispar, las fuentes contextuales del cambio ambiental. La identificación de dichas fuentes constituye el primer elemento del marco. De igual manera, debemos ver la relación entre el cambio ambiental y las políticas de Estado, las relaciones interestatales y el capitalismo global.

Una fuente contextual que aparece en las investigaciones de forma extensiva son las políticas estatales. Como observa Walker (1989: 32), hay un "potencial inherente y continuo para el conflicto entre el papel desarrollador del Estado y el papel protector y gestor del medio ambiente natural sobre la cual depende su existencia finalmente". Una variedad de estudios regionales y temáticos han documentado esta ambigüedad. En Repetto (1988a), Repetto y Gillis (1988) y Hurst (1990), por ejemplo, las políticas estatales se vinculan con los procesos de deforestación. Haciendo referencia a Indonesia, Malasia, Filipinas y Brasil, Gillis (1988a; 1988b), Boado (1988) y Browder (1988b) se refieren a las políticas comerciales,

8 Véase Blaikie (1985), sobre la integración de análisis basados en el "lugar" y el "no lugar".

tributarias, industriales y forestales que han conducido a contextos de políticas públicas perjudiciales para el uso sostenible de los recursos forestales. McDowell (1989), Bautista (1990), Porter y Ganapin (1990), Anderson (1987), Guha (1985; 1990), Hirsch y Lohmann (1989), Kulkarni (1983) y Smil (1984; 1987) también relacionan las políticas estatales con la gestión forestal en distintos países del tercer mundo. En años recientes, varios Estados han intentado tardíamente revertir procesos de deterioro forestal. Peluso y Poffenberger (1989) y Hafner y Apichatvullop (1990) examinan estos esfuerzos en Indonesia y Tailandia.

La Amazonia en Brasil es un material particularmente rico para un estudio de caso. Aunque desde hace mucho tiempo ha estado sujeta a la explotación, las fuerzas políticas y económicas desatadas por el golpe militar de 1964 aceleraron el cambio en el Amazonas, lo cual contribuyó a la "hipoteca social y medioambiental de Brasil" (Guimarães, 1989: 99). Hecht (1984; 1985), Repetto (1988b), Pompermayer (1984), Myers (1984), Branford y Glock (1985) y Browder (1988a; 1988b) documentan los incentivos de crédito e infraestructura utilizados para promover la inversión a gran escala en las granjas de ganado económica y ecológicamente dudosas en la Amazonía oriental. Bunker (1980), Schmink (1988a) y Wood y Schmink (1979) observan el impacto adverso en las actividades (extracción; agricultura a pequeña escala) anteriormente alentadas por el Estado. Como queda manifiesto en el programa Greater Carajas, Hall (1987; 1989), Fearnside (1986) y Anderson (1990) examinan el papel del Estado en los continuos levantamientos regionales, mientras que Cummings (1990) aborda las polémicas políticas energéticas diseñadas para explotar el enorme potencial de la región para la energía hidroeléctrica, pero que están transformando de forma irrevocable su carácter social y ecológico.

El Estado de Brasil continúa con estas desastrosas políticas, pero al abordar este tema, Hecht y Cockburn (1989), Schmink y Wood (1987), Bunker (1985a) y Hall (1989), entre muchos otros, destacan la naturaleza interrelacionada de los intereses comerciales y del Estado. Asimismo, como sugieren Bunker (1982; 1985b) y Guimarães (1989), las divisiones internas y la imposición de procedimientos burocráticos inapropiados en la región también podrían afectar la capacidad del Estado para desarrollar

políticas coherentes. Sin embargo, Brasil no ha estado solo en la perpetuación de políticas ambientales y sociales nocivas. Collins (1986) y Painter (1987) observan políticas similares en países vecinos.

El Estado también influye en el cambio ambiental de otras maneras. Ilustrativo en particular es el caso de la manipulación de suministros de agua y las relaciones entre pastores y agricultores en África. Peters (1984), Cliffe y Moorsom (1979), Hedlund (1979), Worby (1988) y Toure (1988) relatan cómo el Estado introdujo pozos de perforación en Botswana, Kenya y Senegal que condujeron a la transformación de los modos de vida pastoriles y a la degradación ambiental. Horowitz y Salem-Murdock (1987) exploran el impacto socioecológico de una presa patrocinada por el Estado y de las obras de irrigación mecanizada en Sudán. Varios estudios examinan (por ejemplo, Goldsmith y Hildyard 1984; 1986; Adams 1990a) el impacto de la construcción de presas.

La intervención del Estado en las relaciones entre pastores y campesinos también contribuye al cambio ambiental. Bassett (1988) examina las complejidades socioecológicas del apoyo estatal a los pastores fulani en Costa de Marfil. Sin embargo, aún en zonas económicamente frágiles, el Estado típicamente ha favorecido la agricultura sedentaria por encima de las actividades pastorales, lo cual ha intensificado los procesos de degradación ambiental. En diversos escenarios africanos, Thompson (1985), Horowitz (1986), Ahmed (1987) y Horowitz y Little (1987) subrayan algunas de las consecuencias de dicha intervención.

Si bien el desempeño ambiental del Estado se ha examinado de forma extensiva, las fuentes interestatales del cambio ambiental aún no se han abordado en su totalidad. Walker (1989) y Mische (1989) observan cómo la interacción entre los Estados soberanos puede militar contra la estabilidad ambiental a largo plazo. Los conflictos armados interestatales son la faceta más obvia de esta interacción en recibir atención. Retomando la experiencia de la guerra de Vietnam (Westing, 1976; Neilands *et al*., 1972), estas investigaciones abordan los impactos ecológicos del uso de herbicidas, municiones altamente explosivas y otros tipos de armamento. Lauren (1982) ofrece una introducción a este material, pero una serie comisionada

por el Stockholm International Peace Research Institute (Westing, 1980; 1984a; 1984b; 1985) ofrece un abordaje más ambicioso del tema. Aunque la mayoría de las investigaciones sobre conflictos armados interestatales examina las consecuencias ambientales de la guerra nuclear, Pittock *et al.* (1985) y Ambio (1983) brindan dos de los esfuerzos más completos. Galtung (1982) integra diversos aspectos de las investigaciones y analiza el impacto de la actividad militar en los procesos ambientales y de desarrollo.

Sin embargo, muchas de estas investigaciones son generales; por tanto, existe la necesidad de análisis con orientación regional y nacional. Hjort af Ornas y Mohamed Salih (1989) aportan un ejemplo, si bien dispar, en un entorno africano. En diversos contextos nacionales y regionales, los ensayos en este volumen exploran las implicaciones sociales y ecológicas contemporáneas de los recurrentes conflictos armados y la inseguridad personal y grupal endémica. En contraste, Kemf (1990) combina la narrativa personal con la investigación científica para evaluar los efectos sociales y ecológicos prolongados de la guerra ambiental estadounidense en Vietnam. Esta investigación, sin embargo, solo explora la superficie de algunos problemas sobresalientes y se necesita mucho más trabajo al respecto.

Si bien, los conflictos armados son sin duda importantes, el cambio ambiental podría también resultar de la interacción pacífica entre Estados. Dos ejemplos bastante distintos ilustran este punto: el vínculo entre la ayuda internacional y el cambio ambiental, y el manejo internacional de cuencas.

La relación entre la ayuda internacional y la perturbación socioecológica ha sido el foco de cada vez más críticas y preocupaciones. Por medio de agencias multilaterales y nacionales, los Estados primermundistas han facilitado políticas y prácticas social y ambientalmente disruptivas en diversos escenarios del tercer mundo.[9] Muchos de los cambios ambientales asociados a las políticas de Estado también podrían atribuirse parcialmente a esta cooperación interestatal. Esta cooperación, por ejemplo, ha perturbado la relación pastor-campesino con los ecosistemas locales (Horowitz 1986; Ahmed 1987) y a través del apoyo a esquemas de transmigración

9 Uno de los críticos más vocales de estas agencias es la revista *The Ecologist* (Rich, 1985). Para una crítica hegemónica, véase Kasten Jr. (1986). Schneider (1989) también explora este tema.

(Le Prestre 1989; Hurst 1990; Colchester 1986), así como a proyectos hidroeléctricos de gran escala (Goldsmith y Hildyard, 1984; 1986; Cummings, 1990), ha contribuido a la deforestación. Sin duda, no se puede destacar de más la contribución al cambio ambiental de las agencias de ayuda humanitaria: "Permanece como una pregunta abierta… qué tanta influencia realmente ha tenido las agencias de ayuda humanitaria en la naturaleza y en el curso de los proyectos de desarrollo. A menudo se exagera el poder de los donantes de ayuda y desde luego varía mucho" (Adams, 1990a: 166). Asimismo, en una era de mayor conciencia ambiental tanto en el primer mundo como en el tercero, no se debe descartar la posibilidad de una cooperación interestatal más sensible social y ecológicamente —o lo que se ha denominado "el apoyo a la ecologización"— (Conroy y Litvinoff, 1988).

La cooperación pacífica entre los Estados también contribuye al cambio ambiental de otras maneras —como ejemplo está el manejo internacional de cuencas—. Sin embargo, como ilustran algunas investigaciones sobre la cuenca del Nilo, dicha cooperación sigue siendo tentativa y, en un mundo de Estados soberanos, siempre está sujeta a la disrupción. El Nilo ha sido afectado desde hace mucho por lo que Waterbury (1979) denomina "hidropolítica", y Collins (1990) y Godana (1985) examinan los antecedentes coloniales de la cooperación ribereña moderna. Waterbury (1979), Haynes y Whittington (1981), Godana (1985), Collins (1990), Whinington y Haynes (1985) y Beshir (1984) exploran los procesos contemporáneos de cooperación entre Egipto y Sudán. Collins (1990) y Howell *et al.* (1988) ofrecen análisis detallados del desafortunado proyecto del canal Jonglei. Estas y otras obras más generales (por ejemplo, Myers, 1989), destacan cómo los cambios socioeconómicos y ecológicos en la región señalan la necesidad de una cooperación interestatal expandida, mientras subrayan las dificultades políticas asociadas a ella. Sin embargo, como señala Godana (1985), las dificultades políticas asociadas al manejo internacional de cuencas no son únicas en el Nilo. Las antipatías internas e interestatales

que a menudo conducen a la guerra son un obstáculo poderoso y duradero para la cooperación que exige el manejo internacional de los ríos.[10]

Si bien estas fuentes interestatales aún no reciben la atención adecuada, los vínculos entre el capitalismo global y el cambio ambiental en el tercer mundo han sido examinados extensivamente. Redclift (1984; 1987), O'Connor (1989) y Shanmugaratnam (1989) relatan a grandes rasgos estos cambios en los patrones del desarrollo del primer mundo. Otros estudios exploran esta relación con mayor profundidad. Mekvichai (1988) y Lohmann (1990), por ejemplo, examinan las consecuencias ambientales de la silvicultura comercial en Tailandia. Schmink (1988b), Branford y Clock (1985), Hecht (1984; 1985), Schmink y Wood (1987), Bunker (1980;1984; 1985a), Wood y Schmink (1979) y Hecht y Cockburn (1989) evalúan el impacto del desarrollo capitalista en los ecosistemas amazónicos.

Sin embargo, es en el contexto africano que el capitalismo, la degradación ambiental y la pobreza han estado interrelacionados de forma más sistemática. Watts (1983b) y Franke y Chasin (1980) examinan los vínculos entre los cultivos expandidos de cacahuete y algodón y el aumento en la vulnerabilidad de África Occidental a la sequía. O'Brien (1985) nos muestra cómo la transición en Sudán a la producción de cultivos para exportación en la década de los setenta intensificó la degradación ambiental y minó la seguridad alimentaria nacional. Kjekshus (1977), Vail (1977) y McCracken (1987) ofrecen perspectivas contrastantes sobre el impacto del colonialismo y el capitalismo en pueblos y entornos de África Oriental. García (1981), Horowitz y Little (1987) Wijkman y Timberlake (1984), Timberlake (1988) y Cliffe y Moorsom (1979), entre otros, también exploran la relación entre el capitalismo y el cambio ambiental en África.

En años recientes, estudios de área han sido complementados con investigaciones que vinculan a corporaciones transnacionales (CTN) con el cambio ambiental. Pearson (1985) y Leonard (1988) examinan la interacción entre las CTN, Gobiernos del tercer mundo, pueblos y ambiente. Combinando enfoques temáticos con estudios de caso, Pearson (1987)

10 Las antipatías interestatales podrían incluso derivar de conflictos por recursos ambientales; véase Westing (1986) y Mandel (1988).

explora esta interacción más a profundidad. Pintz (1987) y Gillis (1987), por ejemplo, estudian las operaciones de las CTN en Papúa Nueva Guinea e Indonesia, mientras que Gladwin (1987) ofrece un artículo de revisión.

Son de particular interés las investigaciones que vinculan los agronegocios globales con la biotecnología. Aunque no se debe exagerar el papel paradigmático de la biotecnología (Buttel, 1989), la capacidad de manipular vía la genética plantas y animales representa un medio potente para las CTN de efectuar cambios ambientales. Kloppenburg y Ralph (1988), por ejemplo, observan cómo los cultivos resistentes a los herbicidas podrían aumentar el uso de herbicidas, de tal forma que aceleren la degradación social y ambiental. Como observa Bull (1982), esta degradación ya es preponderante. Asimismo, como observa Buttel (1990), una creciente demanda de materiales alimenticios de la industria biotecnológica primermundista podría aumentar la carga que sufren los ecosistemas del tercer mundo ya bajo amenaza. Goodman *et al.* (1987), George (1985), Franke y Chasin (1980), Dinham y Hines (1983), Kenney y Buttel (1985) y Redclift (1987) exploran otros aspectos de esta importante relación.

Mientras que la anterior revisión ha documentado las investigaciones extensas, si bien desiguales, sobre las fuentes contextuales del cambio ambiental, siguen por explorar analíticamente los temas que han surgido. Abordar de esta manera las políticas de Estado, las relaciones interestatales y el capitalismo global ayudará a aclarar la naturaleza del primer eje de indagación del marco.

Las políticas estatales juegan un papel clave en la interacción contemporánea entre lo humano y el ambiente. Así, como apuntan a las prioridades y a las prácticas del Estado, estas políticas ayudan a estructurar el discurso social en torno al cambio ambiental y son cruciales para un entendimiento más amplio de las políticas detrás de dichos cambios. Por tanto, es necesario analizar sus orígenes, contenido, aplicación e impacto.

Las políticas estatales no se desarrollan en un vacío político y económico. En cambio, resultan de una lucha entre actores en competencia que buscan influir en la formulación de las políticas. Dado que las diversas políticas tienen implicaciones ambientales, el número de actores

involucrados puede ser grande e incluir departamentos y agencias gubernamentales, corporaciones nacionales y transnacionales, organizaciones no gubernamentales, agencias multilaterales y Gobiernos extranjeros. El reto es identificar las distintas presiones, a menudo en conflicto entre ellas, que pesan sobre los responsables de la formulación de las políticas, a fin de comprender un resultado de una política particular. También se debe explorar la manera en la que las decisiones políticas anteriores han contribuido al cambio ambiental y cómo esos cambios a su vez afectaron el proceso de toma de decisión.

Las investigaciones, entonces, podrían abordar todo el contenido relevante de las políticas públicas. Las complejidades de tal investigación son tan formidables como los objetivos diversos y a menudo contradictorios de la propia política estatal. Si el Estado es "un teatro en el que se disputan los recursos, los derechos de propiedad y la autoridad" (Watts, 1989: 4), entonces las políticas estatales encarnan esa lucha, a menudo facilitando los intereses de poderosas élites económicas e inculcando desasosiego social y degradación ecológica. Sin embargo, las políticas estatales también promueven objetivos no económicos y, como observan Hecht y Cockburn (1989) y Budiardjo (1986), las cuestiones de seguridad nacional inciden en el proceso político. Dicho de modo más prosaico, las políticas de Estado podrían simplemente reflejar un deseo de las elites políticas de ejercer control sobre grupos e individuos. Desde esta perspectiva, las políticas económicamente desastrosas y los proyectos podrían servir otros fines no declarados —por ejemplo, servir como "manifestaciones rurales de la presencia activa de los Estados" (Hart, en Adams 1990a, 157)—.[11]

Las políticas estatales, entonces, son una encarnación de las luchas y divisiones sociales y de los estrechos intereses del Estado mismo. Estas políticas, sin embargo, no pueden entenderse en aislamiento. Las políticas no solo encarnan objetivos y metas en conflicto, sino que su destino también podría estar vinculado con el de otras políticas fuera del ámbito ambiental. Por ejemplo, las políticas estatales podrán intentar reconciliar

11 Véanse Adams (1990b) y Fox (1988) sobre la centralización burocrática y el control en Kenia. Evidentemente, la centralización y el control varían entre países y regiones.

un interés en la conservación con presiones para el uso comercial y no comercial, dentro de un contexto más amplio en el que las políticas fiscales, comerciales e industriales a menudo perjudican el resultado (Gillis y Repetto, 1988). Dado que muchos Estados del tercer mundo carecen de los mecanismos de coordinación requeridos, la fragmentación de las políticas torna complejo el problema de la investigación. ¿Cómo se las arreglan los diversos grupos de la sociedad y el Estado bajo esas condiciones? ¿Qué papel juegan organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en este proceso? (Le Prestre, 1989). Tales preguntas subrayan la importancia del proceso tanto como del contenido en el análisis de políticas.

Se podría dirigir la atención entonces a la exploración de la aplicación de las políticas. El impacto de una política bien podría derivar más del modo en el que ha sido puesta en marcha que de su contenido, subrayando por ende el importante papel de los funcionarios locales. ¿Acaso la interpretación de las políticas equilibra las expectativas locales con perspectivas oficiales? ¿Están sujetos los funcionarios a presiones de las elites locales, de las corporaciones trasnacionales o de las organizaciones campesinas? ¿Qué papel juega la corrupción en la aplicación de las políticas? ¿Hasta qué grado los procedimientos burocráticos estandarizados son intentos para minimizar las "filtraciones" de las políticas? Sin embargo, como observa Bunker (1982; 1985b), la aplicación de dichos procedimientos a regiones socioeconómicas y ecológicamente subdesarrolladas podría ser problemático en sí mismo. ¿Qué tan exitosas son, entonces, las estructuras burocráticas para controlar las múltiples expresiones de políticas específicas a la localidad? Estas preguntas subrayan la importancia del escenario de aplicación, los funcionarios locales y las estructuras burocráticas en las que operan.

Por último, también se debe abordar el impacto ambiental de las políticas estatales. ¿Acaso la naturaleza y el alcance del cambio ambiental varía según si la política es aplicada directamente por el Estado, o de forma indirecta, por medio de otros grupos sociales? ¿Podrá la política tener un "efecto ambiental multiplicador", acelerando ciertos procesos de interacción entre lo humano y el ambiente a costa de otros? ¿Cómo pueden

los distintos escenarios políticos, económicos y ecológicos influir en el impacto de las políticas?

Si bien la discusión se ha enfocado en el papel que han tenido las políticas estatales en la forma que ha tomado el cambio ambiental, los Estados no formulan políticas en aislamiento entre ellos. Como observa Skocpol (1985: 8), "el Estado moderno siempre ha sido parte de un sistema de estados mutuamente involucrados y en competencia". Por ende, el conflicto y la competencia entre Estados ha contribuido desde hace tiempo a la modificación del ambiente. Y, sin embargo, como señaló la revisión, la investigación en este tema está subdesarrollado. ¿Cuál sería la mejor manera de abordar las dimensiones interestatales del cambio ambiental? Un comienzo útil podría ser distinguir entre sus variantes pacíficas y violentas, que infringen las condiciones de la tierra, el agua y el bosque.

Como señalan las investigaciones, la violencia entre los Estados a menudo contribuye al cambio ambiental. Al explorar esta relación a mayor profundidad, se sugiere que los académicos dediquen más atención a las dimensiones nacionales y regionales de dicha violencia. Ciertos sucesos internacionales recientes refuerzan este punto, a medida que —a pesar de la reconciliación entre Oriente y Occidente—— continúa la distribución de armamento, incluyendo armas nucleares, al tercer mundo. Gill y Law (1988: 370) observan que la reconciliación Oriente-Occidente podría de hecho alentar esta tendencia; en el contexto de reducciones sustanciales en gastos militares domésticos, los superpoderes pueden "mantener sus economías de escala en ciertos tipos de producción militar". ¿Cómo alteraría esta mayor disponibilidad de armas el tipo, extensión e intensidad de la violencia interestatal y del cambio ambiental?

La interacción pacífica entre Estados también está repleta de implicaciones ambientales. Esta interacción podría acelerar el desarrollo de fuentes no estatales de cambio ambiental —el capitalismo global, por ejemplo—. Sin embargo, como subrayó la discusión sobre la ayuda internacional y el manejo de cuencas, la relación entre los Estados contribuye de forma directa al cambio ambiental. ¿Entonces la dependencia de un Estado a otro se traduce en mayor degradación ambiental? Por el contrario, ¿podría un

Estado políticamente en ascenso evitar esa degradación "exportando" a Estados clientelares? ¿Será que los desequilibrios de poder entre Estados surgen, en parte, del control diferencial sobre los recursos ambientales? ¿Podrán los Estados en desventaja utilizar los procesos internos del cambio ambiental —la deforestación tropical, por ejemplo— para fortalecer su posición frente a los demás Estados? En los últimos años, han entrado en el vocabulario político internacional conceptos como el de canje de "deuda-por-naturaleza" y la "negociación".[12] Motivados por una percibida "crisis de los bienes comunales", los Estados primermundistas han empezado a considerar el otorgamiento de concesiones económicas para asegurar la conservación ambiental en el tercer mundo. Es incierto hasta qué grado tales concesiones contrarrestarían los bien fincados desequilibrios de poder entre países "desarrollados" y "en vías de desarrollo".

Sin embargo, tanto las fuentes interestatales como las estatales deben situarse en un contexto más amplio que incluye el papel del capitalismo global. Como encarna cada vez más la corporación trasnacional (TNC)[13], el capitalismo global es una poderosa fuente de cambio ambiental. Las TNC, al buscar la maximización de sus ganancias, el crecimiento corporativo y el control del mercado, han contribuido virtualmente a todas las formas de cambio ambiental. Sin embargo, dichas corporaciones afectan al ambiente de diferente forma. Se podría empezar una examinación de la relación entre el capitalismo global y el cambio ambiental, entonces, con un análisis de la empresa individual, pasar al contexto económico más amplio y concluir con una evaluación del entorno sociopolítico general en el que operan las TNC.

La relación entre la empresa individual y el cambio ambiental plantea una serie de conflictos (Pearson, 1987). ¿Cómo afecta en su papel y desempeño en la gestión ambiental la estructura y organización de una empresa trasnacional? ¿Acaso el grado de centralización o descentralización

12 Brown (1990), Ravenhill (1990), World Commission on Environment and Development. (1987), Angell *et al.* (1990); como demuestran las crisis ambientales, la creciente necesidad de acción internacional, equidad, eficiencia y sostenibilidad se están entrelazando cada vez más. Véase Tolba (1987).

13 Es tal el poder contemporáneo de las TNC, que Gill y Law (1988) hablan de una "etapa transnacional" en el desarrollo del capitalismo.

corporativa influye sobre su historial ambiental? ¿De qué manera el tamaño, la historia, el país de origen y la distribución operativa de una corporación pueden afectar sus acciones ambientales?

Una TNC no es una entidad monolítica y, así como con otras organizaciones sociales, su conducta refleja la interacción entre múltiples individuos y grupos. En consecuencia, existe la necesidad de "deconstruir" la corporación, explorando las actitudes y prácticas de sus empleados. Se debe prestar especial atención a los individuos en la "interfaz" ambiental, responsables de implementar la política corporativa. ¿Qué tan importantes son las opiniones de los gerentes locales, por ejemplo, en la realización de las prácticas y políticas ambientales de una empresa? ¿Se considera significativa la reputación local de la corporación?

Al entender esta relación entre las CTN y el ambiente, también se deben tomar en cuenta los factores sociopolíticos que influyen sobre las acciones individuales de una empresa. ¿Qué caracteriza la industria dentro de la cual opera una CTN? ¿Coexisten empresas pequeñas y grandes o las barreras tecnológicas y financieras alientan condiciones oligopolistas? Si tales condiciones prevalecen, ¿cuáles son las implicaciones para la interacción entre las CTN y el ambiente? Por el contrario, ¿cómo afecta la competencia a las prácticas ambientales de una empresa? A medida que hacen negocios en diversos escenarios nacionales, también debe considerarse la posibilidad de que una empresa enfrente una combinación de estas condiciones.

Dichas características indican las diversas formas en las que las CTN difieren en sus operaciones y, por tanto, en sus relaciones ambientales. Pero las CTN no son independientes de las sociedades en las que operan, y al entender cómo las empresas contribuyen al cambio ambiental, también es importante entender el contexto sociopolítico de sus actividades tanto en el país "sede" como en el país "origen".

En este sentido, la relación entre las CTN y el Estado es en particular significativa. En los países sede del tercer mundo, ¿las políticas estatales se basan en el nacionalismo económico? Si es así, ¿cómo podrían dichas políticas afectar a las CTN y sus prácticas ambientales? Asimismo, aunque

claramente variarán por país, ¿qué factores afectan el poder de negociación entre los países sede y las CTN?

Por otro lado, en años recientes, una revolución conservadora en la comunidad internacional ha revertido las políticas de nacionalismo económico. Cargados con deudas que a menudo no pueden pagar, muchos países adoptaron políticas de ajuste estructural que favorecen las actividades de exportación del sector privado (George, 1988; Watts, 1990). ¿Constituyen tales políticas una carta blanca para que las CTN usen y abusen del ambiente? O, por el contrario, ¿la creciente preocupación por la degradación ecológica en muchas partes del tercer mundo habrá conducido a un clima conducente a regulaciones ambientales más estrictas?

Las CTN también deben ser sensibles a las condiciones sociopolíticas en sus países de origen. Típicamente ubicados en el primer mundo, los países de origen —para mayor precisión, sus Estados— también podrían influir en los impactos de las CTN al ambiente del tercer mundo. Sin embargo, así, igual que en el tercer mundo, los Gobiernos han mostrado poco interés en regular las prácticas de las CTN. Por ende, ¿hasta qué grado los Gobiernos pronegocios en el primer mundo han relajado la supervisión de las CTN? Asimismo, ¿cómo ha afectado la supervisión en casa el clima global comercial más competitivo, y el poder creciente de Japón y de los nuevos países industrializados? Por el contrario, ¿cuáles son las implicaciones de la reemergencia de preocupaciones ambientales (calentamiento global, disminución del ozono, etc.) sobre las agendas políticas nacionales e internacionales para las relaciones entre el Estado de origen y las CTN?

Si la atención hasta ahora se ha centrado en la relación CTN-ambiente, una serie comparable de preguntas podría informar el análisis de las corporaciones nacionales y el cambio ambiental en el tercer mundo. Deben abordarse las distintas restricciones y oportunidades que enfrentan las corporaciones nacionales, diferentes de las trasnacionales. ¿Tienen más libertad para manipular el ambiente las corporaciones nacionales, mientras se espera que las CTN más avanzadas en el plano tecnológico cumplan con estándares más rigurosos? Además, la capacidad de las CTN para moverse dentro y fuera de un país podría conferirles ciertas ventajas de las que no gozan las

corporaciones nacionales. ¿Cómo afecta, entonces, la movilidad a la interacción de una corporación con el Estado, la sociedad y el ambiente?

Estas preguntas subrayan las relaciones complejas entre el capitalismo global y el cambio ambiental en el tercer mundo. Si bien las corporaciones trasnacionales y nacionales juegan un papel crítico en la transformación ambiental, no debe olvidarse la naturaleza multifacética de ese papel. Asimismo, este papel no debe entenderse sólo en relación con otras fuentes contextuales (políticas estatales, relaciones interestatales), sino también en relación con las dimensiones de cambio ambiental específicas para cada localidad. Las investigaciones centradas en el conflicto en torno al acceso, el segundo eje de indagación del marco, podrán profundizar esta comprensión.

Conflicto en torno al acceso

Las investigaciones sobre cuestiones de conflicto en torno al acceso se preguntan por la relación entre los derechos de acceso, las luchas locales y la transformación ecológica (Peluso, 1988; Hirsch, 1990). El segundo elemento del marco se preocupa entonces por las limitaciones y las oportunidades que enfrentan los campesinos y otros grupos socialmente en desventaja en sus luchas para proteger las bases ambientales de su sustento. En específico, al buscar entender el conflicto en torno al acceso, se deben abordar tanto las dinámicas históricas como las contemporáneas de lucha.

Si bien muchas de las investigaciones sobre el conflicto en torno al acceso se enfocan en debates contemporáneos, varios académicos han adoptado una perspectiva histórica. Para ilustrar los elementos de continuidad y cambio en las luchas locales, diversos estudios comparan y contrastan la experiencia colonial y poscolonial. Peluso (1988), Watts (1983b), Guha (1989a), Guha y Gadgil (1989) y Nadkarni (1989) lo hacen focalizado en Java, Nigeria e India. Peters (1984) y Worby (1988) examinan la lucha por derechos de tierra y agua en Botsuana. No obstante, en distintos entornos sociopolíticos y ecológicos, estos estudios logran señalar la mayor transformación llevada a cabo por el dominio colonial, así como el amargo legado de antagonismo

entre el Estado y los campesinos por el control de los recursos ambientales que, incluso hoy, da pocas señales de desaparecer.

La naturaleza del conflicto entre el Estado y los campesinos en la era poscolonial, así como otros tipos de conflictos en torno al acceso, han sido revisados de forma extensa. Las obras de Shiva (1987), Agarwal y Narain (1985), Fernandes (1990), Jodha (1986), Lohmann (1990) Leonard (1985), Thompson (1985) y Schmink (1982) ilustran el alcance de los conflictos que se abordan. La revisión a continuación, entonces, subraya solo algunos temas selectos.

Los conflictos que enfrentan a los campesinos contra las élites económicas o políticas no solo implican cuestiones de "tierras", sino pueden abarcar la lucha por la flora y fauna (Peluso, 1988; MacKenzie, 1988; Dogra, 1985; Saldanha, 1990), condiciones del suelo (Hirsch y Lohmann, 1989) y el suministro de agua (Peters, 1984). Sin embargo, más estudios deberían considerar el papel que juegan estos y otros recursos ambientales en la subsistencia de los campesinos pobres (Chambers y Leach, 1989; Hecht *et al*., 1988). Al mismo tiempo, se necesita más conocimiento de cómo dichos grupos interpretan este papel (Chambers, 1983; Richards, 1985; Blauert, 1988).

La complejidad del conflicto en torno al acceso se puede atribuir en parte a los sistemas de tenencia y las instituciones sociales que regulan el acceso, control y uso de los recursos ambientales. Son ilustrativos algunos estudios recientes en la sociología del acceso en África. Para entender mejor los asuntos de agricultura y ecología, Okoth-Ogendo (1989), Blaikie (1989a) y Berry (1989b) ofrecen perspectivas contrastantes respecto al uso y el acceso a los recursos. Mackenzie (1986; 1989) Haugerud (1989), Carney y Watts (1990), Becker (1990) y Davison (1987) aportan estudios de caso empíricos que examinan muchas de las ideas desarrolladas en estas obras. En estas investigaciones se subraya la complejidad del acceso; múltiples derechos que se solapan se combinan con la tenencia formal e informal para producir un complejo entramado de dependencias. De manera similar, como señalan Peters (1984) y Berry (1988), las luchas son igualmente complejas. Dada la importancia de la identidad social, por ejemplo, en la determinación de los derechos de acceso, "las luchas por el significado son parte del proceso de asignación de recursos tanto como

lo son las luchas por el excedente o el proceso laboral" (Berry, 1988: 66). Como destacan Berry (1988) y Haugerud (1989), esta complejidad tiene importantes implicaciones en la regulación del uso de suelo tanto para los esfuerzos públicos como para los privados.

El papel de las mujeres en el conflicto en torno al acceso es crucial y, sin embargo, típicamente no se ha tomado en cuenta. Es reciente que el género empiece a recibir atención sistemática. Shiva (1987; 1988), Agarwal (1988a; 1988b; 1989), Mies (1984), Jain (1984) y Agarwal (1988c), por ejemplo, consideran el papel de las mujeres de India en las luchas para recuperar el acceso a recursos terrestres, hídricos y forestales. Agarwal (1990) analiza la relación entre estas luchas y la seguridad individual/familiar ante los cambios de estación y las calamidades. En el contexto de Kenya, Davison (1987), Mackenzie (1986; 1989) y Maathai (1986) examinan cuestiones de tenencia, cambio ambiental y politización de las mujeres. De manera similar, Dankelman y Davidson (1988) y Carney y Watts (1990) exploran aspectos de la lucha femenina. Enfocadas en desigualdades derivadas del género, estas investigaciones analizan las relaciones dentro del hogar como "un terreno profundamente disputado" (Watts, 1989: 12), en el cual el acceso a los recursos ambientales permanece como una fuente amarga de conflicto.[14]

Como se ha ilustrado, el conflicto en torno al acceso a recursos ambientales es una poderosa fuente de división social. Sin embargo, además del hogar, también es significativo el conflicto entre grupos "contextuales" y en desventaja social. Al abarcar relaciones "campesinas" con elites políticas y económicas, este conflicto podría formalizarse con el desarrollo de movimientos ecologistas. Como se discute más abajo, los movimientos ecologistas son una estrategia importante para las personas en situación de pobreza que intentan conservar las fuentes ambientales de su sustento.

La revisión anterior subraya las complejidades del conflicto en torno al acceso, así como las investigaciones que apenas empiezan a reconocer esa complejidad. Sin embargo, en términos analíticos, el segundo eje de indagación del marco podría ser abordado de mejor manera si existiera

14 Véanse también Guyer y Peters (1987) y Whitehead (1990).

una preocupación por buscar temáticas en las dinámicas históricas y contemporáneas del conflicto.

La adopción de una perspectiva histórica sirve como un recordatorio útil de que el conflicto en torno al acceso es intrínseco al desarrollo humano. Conformado por diversos factores políticos, sociales y ecológicos, se ha expresado en un sinnúmero de formas específicas a la localidad. Como tal, la lucha por el acceso no se originó con el capitalismo y el colonialismo —donde el segundo es simplemente el más reciente en un ámbito recurrente de luchas humanas por el ambiente—.[15]

No obstante, el advenimiento del colonialismo y el capitalismo marca un cambio cualitativo en la historia de la lucha del tercer mundo. Mientras el conflicto precolonial en torno al acceso era templado por relaciones de poder descentralizadas y por un nivel relativamente bajo de desarrollo tecnológico, la lucha colonial y poscolonial ha enfrentado pocas restricciones de ese tipo. ¿Cómo ha afectado esta transformación de capacidades políticas, económicas y tecnológicas a los patrones tradicionales de conflicto? ¿Hasta qué punto han surgido nuevos patrones o se han invocado prácticas tradicionales?

Una apreciación de las dimensiones históricas del conflicto en torno al acceso es vital para entender las luchas contemporáneas. Inherentemente específico a la localidad, este tipo de conflicto, sin embargo, pone en contacto a actores nacionales e internacionales, así como actores locales, y encarna la lucha entre los distintos intereses políticos, sociales y económicos. El manejo de dichos intereses en competición es un tema de investigación fundamental.

Sin embargo, para entender las dinámicas contemporáneas del conflicto, se debe hacer una distinción espacial entre los actores que se encuentran en o cerca del sitio de conflicto y quienes se encuentran en otras partes —en centros regionales, nacionales o internacionales—. ¿Cómo podría influir este patrón en la naturaleza y el desenlace de las luchas y reflejarse en coaliciones entre actores? ¿Cómo se construyen las coaliciones? ¿Qué

15 Véanse Allen y Crittenden (1987); Clarke (1990).

impacto tiene la fragmentación espacial de los actores "contextuales", el Estado y las CTN en los conflictos específicos a la localidad?

Los actores, espacialmente diferenciados, también difieren en su acceso a recursos estratégicos. Las CTN y el Estado, por ejemplo, suelen contar con mayores recursos informáticos y tecnológicos que los aldeanos locales. Cómo estos actores contextuales despliegan dichos recursos en luchas específicas a la localidad es una de las preguntas de investigación cruciales. ¿Hasta qué punto los desequilibrios en la capacidad tecnológica o informática podrían afectar el desenlace? ¿La superioridad en recursos estratégicos podría ser contrarrestada por otros factores, quizá intangibles? En el contexto de Malasia, por ejemplo, Scott (1985) ha demostrado que las "armas de los débiles" no son intrascendentes en el conflicto en torno al acceso. Cuando se combinan con resistencia abierta, la tenacidad y la desesperación de quienes enfrentan la pérdida de recursos ambientales críticos, pueden, hasta cierto grado, contrarrestar las fuerzas de los poderosos (Anderson y Huber, 1988).

Reconocer la diferenciación espacial, tecnológica e informática entre actores es apenas un paso preliminar hacia el entendimiento de las dinámicas contemporáneas del conflicto en torno al acceso. Aunque ayudan, no se toman en cuenta los detalles de diferenciación y acerca del conflicto —prerrequisitos para un abordaje exhaustivo del conflicto en torno al acceso—. Entonces, una indagación más adecuada debe deconstruir los términos comúnmente usados, que suelen ocultar más que revelar ("campesino", "Estado", "CTN") para exponer la realidad compleja incrustada en ellos.

Un examen de lo específico, en vez de las generalidades del conflicto en torno al acceso, cuestiona creencias ampliamente sostenidas sobre la interacción entre lo humano y el ambiente en el tercer mundo. El conflicto entre aldeanos pobres que dependen de los recursos terrestres, hídricos y forestales para su bienestar y las diversas poderosas coaliciones que intentan privarlos del acceso a estos recursos es recurrente en las investigaciones. Sin embargo, esta dicotomía enmascara un complejo entramado de relaciones de poder (Hirsch, 1990; Bernstein, 1990). ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los aldeanos son una masa indiferenciada, unidos por su

miseria? ¿Acaso no están también inmersos en relaciones diferenciadas con los poderosos y entre ellos, y no se traduce esto en intereses y objetivos diferenciados en el conflicto en torno al acceso? En este sentido, el papel de las mujeres amerita particular escrutinio. En el hogar, ¿cómo contribuyen las divisiones de trabajo por género, a menudo desiguales, a las complejidades de la lucha social por la tierra, el agua y los bosques? Se pueden plantear preguntas parecidas en relación con los actores contextuales. ¿Acaso las élites políticas y económicas actúan en unanimidad? ¿La unidad del Estado estará amenazada por intereses personales y burocráticos divergentes, y estarán siempre de acuerdo el Estado y las CTN?

Estas preguntas no sólo subrayan las complejidades del conflicto en torno al acceso, sino también indican las dificultades asociadas a su gestión. Aunque el Estado juega un papel central en el manejo del conflicto, su papel está circunscrito al menos por dos factores. En primer lugar, el Estado no es un observador imparcial en dichas luchas —ciertamente, suele ser un participante que lidera—.[16] En segundo lugar, el Estado suele estar dividido por intereses en conflicto.

Dadas estas circunstancias, ¿qué papel juegan otros actores en el manejo del conflicto? ¿Hasta qué grado la intimidación, la coerción, las conductas para evitar visibilidad, las protestas organizadas, el robo y el soborno regulan la lucha por el acceso? Asimismo, ¿Cómo deberían interpretarse los esfuerzos de las CTN por cultivar una buena voluntad en la gente local? Las investigaciones deben sensibilizarse ante las complejidades del conflicto, las formas multifacéticas en las que se maneja dicho conflicto y las ramificaciones políticas del cambio ambiental.

Ramificaciones políticas del cambio ambiental

Las investigaciones sobre las ramificaciones políticas del cambio ambiental, el tercer eje de indagación del marco analítico, explora las maneras en las que el cambio ambiental influye en las desigualdades socioeconómicas

16 Dove (1986) y Blauert (1988) ilustran cómo las percepciones locales y estatales del desarrollo pueden divergir.

y, por extensión, en los procesos políticos. Por consiguiente, reconoce una dimensión a menudo ignorada. Así como las fuerzas políticas contribuyen al cambio ambiental, la modificación de la tierra, el agua y los bosques tiene ramificaciones políticas importantes. Sin embargo, para apreciar mejor estas ramificaciones, se debe dirigir la atención al impacto socioeconómico y a los procesos políticos.

Las diversas investigaciones sobre las ramificaciones políticas han sido guiadas por dos preguntas básicas. Primero, ¿hasta qué grado los costos del cambio ambiental son absorbidos por los grupos socialmente en desventaja, y cómo es que esta distribución desigual de costos condiciona las desigualdades socioeconómicas existentes? Y en segundo lugar, ¿bajo qué circunstancias la exposición desigual al cambio ambiental modifica los procesos políticos?

En las investigaciones, son recurrentes las cuestiones de impacto socioeconómico, y han sido abordadas de distintas maneras. Blaikie (1985) observa que la erosión del suelo afecta adversamente tanto a los pequeños campesinos como a los urbanitas pobres. Thompson (1985) explora cómo la desertificación en Niger refuerza desigualdades entre los tuareg, y Zaman (1989) examina cómo la erosión de las riberas en los humedales Brahmaputra-Jamuna de Bangladesh fortalece la dependencia en las elites rurales de los campesinos sin tierras y desplazados. Agarwal y Narain (1985) y Agarwal (1988c) evalúan los efectos de la degradación ecológica en los pobres de la India. Entre muchos otros, Hecht y Cockburn (1989), Ramos (1984) Bunker (1985a), Hecht *et al.* (1988) y Cummings (1990) subrayan el impacto en los grupos de la región con desventaja social de la extracción de recursos en el Amazonas.

No es sorprendente que estas investigaciones destaquen la particular vulnerabilidad a la degradación ecológica de las personas en situación de pobreza: la erosión del suelo, la desertificación y la deforestación. Pero también son amenazadas por cambios que, superficialmente, podrían considerarse benéficos para el ambiente. Los cultivos comerciales de árboles son un buen ejemplo. Lohmann (1990), Hirsch y Lohmann (1989), Agarwal (1989a) y Agarwal y Narain (1985), por ejemplo, observan cómo las plantaciones de

eucalipto en Tailandia e India podrían eliminar las oportunidades de pastoreo y recolección de productos menores del bosque, amenazando incluso regímenes locales de suelo y de agua. Como observa Agarwal (1988c), incluso sembrar eucalipto en tierras "baldías" implica a los pobres, quienes podrían necesitar del "monte" de estas tierras para alimentarse.

Las investigaciones que abordan las ramificaciones políticas del cambio ambiental subrayan las serias dificultades en las que se encuentran las personas con desventajas sociales y ecológicas. Para algunos, la lección parece clara: "La pobreza y la degradación medioambiental forman una trampa de la cual hay pocas probabilidades de escapar" (Adams, 1990a: 87). Y paradójicamente, sin embargo, la degradación ambiental también puede asistir a los pobres. Como observa Chambers (1987), la tierra degradada y devaluada monetariamente aún podría brindar "sustento sostenible", sobre todo cuando se combina con ingresos externos a la agricultura (Blaikie, 1988a). Aunque no se debe exagerar, la adaptación a las circunstancias cambiantes, impulsada por una auténtica búsqueda de la sobrevivencia, no debería descartarse de inmediato (Mortimore, 1989). La resiliencia de la tierra y de la gente pobre al obtener de ella su sustento no es un elemento que se pueda subestimar, ni deberíamos estar leyendo un obituario político del campesinado del tercer mundo (Hall, 1989; Browder, 1989; Richards, 1990).

Asimismo, al examinar las ramificaciones políticas del cambio ambiental, no debemos olvidar la voluntad y la capacidad de los pobres para luchar por superar sus adversidades. Las investigaciones sobre las protestas campesinas a menudo destacan la naturaleza clandestina de dichas resistencias (Scott, 1985), y existe evidencia de esta actividad encubierta en varias fuentes aquí abordadas. Guha (1989a; 1989b), Peluso (1988) y Hafner y Apichatvullop (1990) citan los incendios provocados y el robo como ejemplos de resistencia cotidiana, pero, como observa Scott (1985: 29-30), estas "armas de los pobres" no deben ser exageradas, ya que "es poco probable que logren más que afectar las diversas formas de explotación que enfrentan los campesinos".

No es muy sorprendente que los campesinos que enfrentan una amenaza a la base ambiental de su sustento hayan recurrido a la resistencia colectiva abierta. Como demuestra Guha (1989a; 1989b), esta forma de resistencia no es nueva. No obstante, es solo desde las últimas dos décadas que los movimientos de defensa del ambiente del tercer mundo han cobrado fuerza.

Numerosos académicos han examinado el surgimiento de movimientos ecologistas en África, América Latina y Asia. Aunque estos grupos difieren entre sí, hay similitudes importantes entre ellos. Como observa Redclift, los movimientos ecologistas en el Sur se deben diferenciar de sus equivalentes del Norte:

> Los dos principales componentes de los movimientos ecologistas del Sur son de importancia marginal para la mayoría de los movimientos en los países desarrollados. Consisten en que aquellos que constituyen el "movimiento" están involucrados en una lucha por la subsistencia y, en segundo lugar, que reconozcan que esta lucha por la subsistencia sólo puede ser exitosa si el medio ambiente se gestiona de forma sostenible (1987: 159).

Estas "luchas por la subsistencia", entonces, han sido el foco de mucha atención. Redclift (1987) brinda una introducción útil para los movimientos ecologistas del tercer mundo. En el contexto indio, Agarwal y Narain (1985) y Omvedt (1989) revisan una plétora de movimientos emergentes. En particular, Shiva (1987) Shiva y Bandyopadhyay (1988), Weber (1987), Bahuguna (1985) y Guha (1989a) subrayan el desarrollo del renombrado movimiento indio. Hirsch y Lohmann (1989) y Lohmann (1990) estudian varios movimientos impulsados por tailandeses para disputar los cultivos de eucalipto y las presas hidroeléctricas. Maathai (1986) rastrea la evolución del Movimiento Cinturón Verde de Kenya. Redcliff (1987) examina movimientos ecologistas mexicanos, mientras que Hecht y Cockburn (1989) y Schwartzman (1989) discuten sobre los movimientos de los recolectores de caucho en la Amazonia de Brasil.

Mucho de estas investigaciones se basan en las luchas por la subsistencia de grupos étnicamente dominantes, si bien subordinados en lo económico.

¿Pero qué sucede con las minorías étnicas y sus formas de protesta y resistencia? Falta por explorar de forma adecuada el vínculo entre la etnia, el cambio ecológico y la protesta política. Varios estudios, sin embargo, sugieren las posibilidades de investigación. Hong (1987) brinda un estudio detallado de la deforestación y la protesta indígena en Sarawak. Drucker (1985), Porter (1990) y Hurst (1990) también exploran la resistencia de las minorías étnicas en el sudeste de Asia. Hecht y Cockburn (1989) y Cummings (1990) documentan brevemente la génesis de las luchas indígenas en el Amazonas. Blauert (1988) discute sobre la resistencia autóctona emergente en el sur de México, y Anderson y Huber (1988) aportan un caso de estudio de protestas similares en India central.

La revisión anterior de las obras sobre las ramificaciones políticas del cambio Ambiental destaca que dichos cambios no sólo exacerban las desigualdades socioeconómicas, sino que también sirven como catalizadores de la protesta política, manifestada notablemente en los movimientos ecologistas. Al analizar este tercer elemento del marco analítico, existe, por ende, una necesidad de diferenciar entre el impacto socioeconómico y el proceso político.

Una apreciación de las ramificaciones políticas del cambio ambiental suele necesitar un entendimiento específico de la localidad. Como han observado Blaikie (1985), Blaikie y Brookfield (1987a) y otros, este entendimiento debe ser sensible a los procesos físicos y biológicos específicos de una localidad dada. Para los objetivos de este ensayo, el desarrollo de un enfoque técnico y específico a la localidad es, sin embargo, innecesario.[17] Al explorar las dimensiones políticas del cambio ambiental, es más apropiado un esquema general. Por consiguiente, al referirnos al cambio ambiental, se hace una distinción amplia entre los cambios episódicos y los cambios cotidianos.[18] Los cambios episódicos incluyen inundaciones, sequías y distintos tipos de contaminación. Aunque estas dos formas de

17 Para una introducción a sistemas ambientales, véase Johnston (1989).

18 Este término se refiere al cambio ambiental rutinario y modifica la noción de Scott (1985) de resistencia campesina.

cambio ambiental podrán estar interconectados, esta interconexión sigue siendo debatida (Hamilton y Pearce, 1988; Messerli, 1990).

Las formas cotidianas de cambio ambiental son, como sugiere su nombre, ubicuas temporal y espacialmente; su impacto gradual y acumulativo en las comunidades humanas puede pasar desapercibido durante mucho tiempo (Blaikie, 1985). Cuando se reconocen estos cambios, podrían entonces combinarse con intereses humanos, para dar lugar a percepciones y definiciones en conflicto (Blaikie y Brookfield, 1987b). ¿Cómo se convierten los gestores territoriales, por ejemplo, en marginados espacial y económicamente? ¿Cómo se relaciona dicha marginalización con la marginalidad ecológica —es decir, tierras de capacidad baja o errática—? Asimismo, ¿cómo interactúan estas formas de marginalidad para producir un "socio-ecocidio", o una espiral de degradación humana y ambiental? Lo que es más importante, ¿cómo pueden organizar una resistencia los individuos y los grupos atrapados en esta trampa?

Las formas cotidianas de cambio ambiental también deben vincularse a formas de cambio episódicas —sequías, inundaciones y otros desastres que periódicamente amenazan a la existencia humana—. Aunque el cambio episódico ocurre con independencia del diseño humano, su impacto en las comunidades no es para nada exclusiva ni predominantemente "natural" (Watts, 1983a; Susman *et al*., 1983). Los procesos de marginalización social y ecológica mencionados arriba respecto al cambio cotidiano también son vitales para entender el impacto del cambio episódico. La marginalización típicamente aumenta la vulnerabilidad de los pobres al cambio episódico, al derrumbar los mecanismos de defensa que existían contra el estrés ecológico (Shenton y Watts, 1979; Watts, 1984). Como ejemplifica la historia reciente de la hambruna en África, la interacción entre procesos de marginalización y formas episódicas y cotidianas de cambio ambiental pueden tener consecuencias humanas trágicas.

Como ilustra la discusión sobre el impacto socioeconómico, la exposición desigual de grupos e individuos al cambio ambiental está imbuido de significado político. El cambio ambiental puede reflejar no sólo las desigualdades ya existentes, sino que también puede reforzarlas insidiosamente

a largo plazo. Como dice Durning (1990: 135), "el perfil de la pobreza se ha vuelto cada vez más medioambiental".

La exposición desigual al cambio ambiental también podría modificar procesos políticos —y aun así, esta relación no es evidente por sí sola—. Aunque ocurra el cambio político, no se puede suponer que ese cambio está diseñado para revertir la degradación ecológica o para ayudar a aquellos grupos o individuos adversamente afectados por dicha degradación. Por tanto, así como el impacto socioeconómico resuena con ambigüedad, también lo hace su desenlace político.

Para dar una imagen más clara de cómo el cambio ambiental afecta a los procesos políticos y es absorbido por ellos, se debe entender la red de relaciones de poder. Frente a las crisis ambientales, ¿estas relaciones facilitan o impiden la movilización social? Dicho de otra manera, ¿las relaciones de poder son reforzadas por el cambio ambiental? Y si es así, ¿cómo son reforzadas? ¿Qué oportunidades tienen los grupos oprimidos para la protesta y la resistencia?

Como especifican las investigaciones, las personas con desventajas sociales en muchas partes del tercer mundo están pasando cada vez más a estrategias abiertas de resistencia colectiva y, como se manifiesta con los movimientos ecologistas, dichas estrategias representan un desafío potencialmente potente a los procesos políticos locales, nacionales e incluso internacionales. ¿Qué tan exitosa es esta resistencia para sobreponerse a configuraciones políticas y económicas del poder dispuestas a perpetuar el *status quo*? Yendo más lejos, ¿cómo intentan las elites políticas y económicas apaciguar las protestas, debilitar la resistencia y reafirmar las relaciones de poder vigentes (Cummings, 1990)? ¿Son vulnerables los movimientos ecologistas del tercer mundo, a menudo coaliciones de intereses diversos y potencialmente contradictorios, a la subversión por parte de dichas elites? ¿Cuántos de estos movimientos se defienden contra divisiones internas? Como ilustran Guha (1989a), Weber (1987) y Agarwal (1988a), los movimientos ecologistas —como el movimiento chipko— se pueden diferenciar según su filosofía, el género y sus estrategias de resistencia. Irónicamente, el enfoque específico a la localidad de los movimientos

ecologistas debilita y podría en última instancia limitar su capacidad para redefinir las estructuras de poder prevalecientes.[19]

Estas preocupaciones son centrales para entender las ramificaciones políticas del cambio ambiental. Con un enfoque en la relación entre el cambio ambiental, el impacto socioeconómico y el proceso político, dichas investigaciones abordan problemáticas a menudo ignoradas. Rechazan suposiciones fáciles sobre el cambio ambiental y el bienestar humano —por ejemplo, que la degradación ecológica es un mal universal que aflige a los ricos y a los pobres por igual—. Por el contrario, exploran cómo dichos cambios se incorporan a relaciones políticas y económicas concretas y las maneras en las que puede usarse luego para reforzar o desafiar dichas relaciones. Como tal, las investigaciones sobre las ramificaciones políticas del cambio ambiental constituyen una parte integral —junto con los análisis del conflicto en torno al acceso y las fuentes contextuales del cambio ambiental— de una indagación más general en las políticas del cambio ambiental.

Sinopsis e implicaciones

Este trabajo ofrece una exploración preliminar de la ecología política del tercer mundo y, para este fin, se ha desarrollado un marco analítico que consiste en tres ejes de indagación. Aunque se relacionan entre sí, diferenciamos las fuentes contextuales del cambio ambiental, el conflicto en torno al acceso y las ramificaciones políticas del cambio ambiental para apreciar los procesos específicos involucrados. En cada caso, se revisaron las investigaciones relevantes y se examinaron las principales problemáticas analíticas. Sin embargo, debería reiterarse que ni la revisión ni los componentes analíticos pretenden ser exhaustivos.

Como encarna el marco de este ensayo, la agenda para la ecología política del tercer mundo es compleja y, a la vez, requiere de refinamiento analítico, así como de exploración empírica. ¿Cómo se puede alentar un

19 Esta debilidad podría ser contrarrestada por vínculos con grupos ecologistas internacionales (por ejemplo, Greenpeace) y con organizaciones no gubernamentales primermundistas sensibles a cuestiones ambientales (Conroy y Litvinoff, 1988). Sobre la importancia creciente de estos grupos en la diplomacia ambientalista internacional, véase Caldwell (1988).

trabajo de este tipo? Un primer paso debe reconocer que la ecología política del tercer mundo sí constituye ciertamente una agenda de investigación emergente. Sin embargo, dicho reconocimiento está impedido por una falta de conocimiento. Divididos por afiliaciones disciplinarias e institucionales, muchos académicos han quedado aún más aislados por el giro empírico y orientado a las políticas de la comunidad académica. Donde sí ha ocurrido un intercambio académico ha tendido a permanecer en el ámbito regional, donde el intercambio exhaustivo con el tercer mundo es más la excepción que la regla (por ejemplo, Little y Horowitz, 1987; Repetto y Gillis, 1988). Un sentimiento creciente de comunidad, sostenido por la conciencia de una agenda de investigación común, podría eliminar algunos de los obstáculos a la cooperación y establecer el escenario para una fase más intensiva en el desarrollo de la ecología política del tercer mundo.

Conforme emerge esta agenda, se deberán abordar nuevas problemáticas, donde el papel de la ideología y la cultura en el cambio ambiental parece de particular importancia.[20] Cómo se perciben el ambiente y los cambios ambientales y cómo se vinculan a distintos aspectos del desarrollo humano influye en la naturaleza y el alcance de esos cambios. Sin embargo, de igual manera, estos factores se deben integrar con las fuerzas contextuales y específicas a la localidad que se discutieron arriba.

Las ideas nunca son "inocentes". Las concepciones mentales, incluyendo sistemas de creencia, moralidad, filosofía y ley, refuerzan o desafían los arreglos económicos y sociales existentes. Y lo hacen de forma activa, como participantes sesgados en un trato sociopolítico (Schmink y Wood, 1987: 51).

Al explorar esta y otras problemáticas, la ecología política debe situarse en el contexto más amplio de los estudios del tercer mundo. Dicha integración beneficiará a estos últimos (Hettne, 1990), mientras promueva un desarrollo más riguroso de lo primero. La ecología política del tercer mundo podría enriquecerse con el trabajo reciente en agendas de investigación adyacentes que a menudo se sobreponen: estudios campesinos y

20 La expresión ideológica se discute en Schmink y Wood (1987), Blaikie (1985), Beinart (1984) y MacKenzie (1988). Otra problemática es la relación ambigua entre el crecimiento demográfico y el cambio ambiental (Blaikie y Brookfield, 1987c). Véanse también Adams (1990a) y Corbridge (1986).

análisis del poder (Scott, 1985; Colburn, 1989; Hart *et al*., 1989); estudios de género y del hogar (Watts 1989; Whitehead 1990); y las investigaciones sobre las políticas de la caza y la conservación (Beinart, 1989; 1990). Conforme se definen estas agendas, sus hallazgos e implicaciones deben incorporarse sistemáticamente a la ecología política del tercer mundo, con referencia particular al conflicto en torno al acceso y las ramificaciones políticas del cambio ambiental.

Se requiere urgentemente de una definición más sistemática de la agenda de investigación. La ecología política del tercer mundo surge en un momento de intenso cambio ambiental e intenta integrar el análisis ambiental y político para ilustrar cómo estas dos actividades, que contribuyen ambas en dar forma al destino humano, se interconectan y, lo que es más importante, cómo una no puede entenderse del todo sin la otra. Es en el reconocimiento y el análisis de esta interdependencia que la ecología política del tercer mundo podría hacer su aportación más crucial.

Reconocimientos

Estoy agradecido con el editor y los tres árbitros anónimos por sus útiles comentarios. También deseo agradecer al Sr. P. Scott y al profesor R. H. Taylor por su crítica constructiva, y al Overseas Research Students Awards Scheme por su apoyo a mi programa de investigación. Por último, una apreciación especial a MS Sheglah J. Squire por su comprensión y apoyo editorial.

Referencias

Adams, W. M. 1990a. *Green development: environment and sustainability in the third world*. Routledge.

Adams, W. M. 1990b. How beautiful is small? Scale, control and success in Kenyan irrigation. *World Development*, *18*, 1309-1323.

Agarwal, B. 1988a. Neither sustenance nor sustainability: agricultural strategies, ecological degradation and Indian women in poverty.

En B. Agarwal (ed.). *Structures of patriarchy state, community and household in modernising Asia* (83-120). Zed Books.

Agarwal, B. 1988b. Who sows? Who reaps? Women and land rights in India. *Journal of Peasant Studies*, *15*, 531-581.

Agarwal, A. 1988c. Beyond pretty trees and tigers in India. En D. C. Pitt (ed.). *The future of the environment: the social dimensions of conservation and ecological alternatives* (93-125). Routledge.

Agarwal, B. 1989. Rural women, poverty and natural resources: sustenance, sustainability and struggle for change. *Economic and Political Weekly*, *24*(43), 46-65.

Agarwal, B. 1990. Social security and the family: coping with seasonality and calamity in rural India. *Journal of Peasant Studies*, *17*, 341-412.

Agarwal, A. y S. Narain. 1985. *The state of India's environment 1984-85: the second citizens' report*. Centre for Science and Environment.

Ahmed, A. G. M. 1987. National ambivalence and external hegemony: the negligence of pastoral nomads in Sudan. En M. A Mohamed Salih (coord.). *Agrarian change in the Central Rainlands: a socio-economic analysis* (129-148). Scandinavian Institute of African Studies.

Allen, B. y R. Crittenden. 1987. Degradation and a pre-capitalist political economy: the case of the New Guinea highlands. En P. Blaikie y H. Brookfield (coords.). *Land degradation and society* (145-156). Methuen.

Ambio y Royal Swedish Academy of Sciences. 1983. *Nuclear war: the aftermath*. Pergamon Press.

Anderson, A. B. 1990. Smokestacks in the rainforest: industrial development and deforestation in the Amazon basin. *World Development*, *18*, 1191-1205.

Anderson, J. N. 1987. Lands at risk, people at risk: perspectives on tropical forest transformations in the Philippines. En P. D. Little y M. M. Horowitz (eds.). *Lands at risk in the third world: local-level perspectives* (249-267). Westview Press.

Anderson, R. y W. Huber. 1988. *The hour of the fox: tropical forests, the world bank, and indigenous people in Central India*. University of Washington Press.

Angell, D. J. R., J. D. Comer y M. L. N. Wilkinson. 1990. *Sustaining Earth: response to the environmental threat*. Macmillan.

Bahuguna, S. 1985. People's response to ecological crises in the hill áreas. En J Bandyopadhyay, N. D. Jayal, U. Shoettli y C. Singh (coords.). *India's environment: crises and responses* (217-226). Natraj Publishers.

Bassett, T. 1988. The political ecology of peasant-herder conflicts in the northern Ivory Coast. *Annals of the Association of American Geographers*, *78*, 453-472.

Bautista, G. 1990. The forestry crisis in the Philippines: nature, causes, and issues. *The Developing Economies*, *28*, 67-94.

Becker, L. C. 1990. The collapse of the family farm in West Africa? Evidence from Mali. *GeographicaI Journal*, *156*, 313-322.

Beinart, W. 1984. Soil erosion, conservationism and ideas about development: a Southern African exploration, 1900-1960. *Journal of Southern African Studies*, *11*, 52-83.

Beinart, W. 1989. Introduction: the politics of colonial conservation. *Journal of Southern African Studies*, *15*, 143-162.

Beinart, W. 1990. Empire, hunting and ecological change in Southern and Central Africa. *Past and Present*, *128*, 162-186.

Benton, T. 1989. Marxism and natural limits: an ecological critique and reconstruction. *New Left Review*, *178*, 51-86.

Bernstein, H. 1990. Taking the part of peasants? En H. Bernstein, B. Crow, M. Mackintosh y C. Martin (coords.). *The food question: profits versus people?* (69-79). Earthscan.

Berry, S. 1988. Concentration without privatization? Some consequences of changing patterns of rural land control in Africa. En R. E.

Downs y S. P. Reyna (coords.). *Land and society in contemporary Africa* (53-75). University of New Hampshire.

Berry, S. 1989a. Access, control and use of resources in African agriculture: an introduction. *Africa*, *59*, 1-5.

Berry, S. 1989b. Social institutions and access to resources. *Africa*, *59*, 41-55.

Beshir, M. O. 1984. *The Nile valley countries: continuity and change*. University of Khartoum, Institute of African and Asian Studies.

Blaikie, P. 1985. *The political economy of soil erosion in developing countries*. Longman

Blaikie, P. 1988a. The explanation of land degradation in Nepal. En J. Ives y D. C. Pitt (coords.). *Deforestation: social dynamics in watersheds and mountain ecosystems* (132-158). Routledge.

Blaikie, P. 1988b. Environmental crises in developing countries: how much, for whom and by whom? An introduction and overview. En P. Blaikie y T. Unwin (coords.). *Environmental crises in developing countries* (1-6). Institute of British Geographers.

Blaikie, P. 1989a. Environment and access to resources in Africa. *Africa*, *59*, 18-40.

Blaikie, P. 1989b. Natural resource use. En R. J. Johnston y P. J. Taylor (coords.). *A world in crisis* (125-150). Basil Blackwell.

Blaikie, P. y H. Brookfield. 1987a. *Land degradation and society*. Methuen.

Blaikie, P. y H. Brookfield. 1987b. Defining and debating the problema. En P. Blaikie y H. Brookfield (coords.). *Land degradation and society* (1-26). Methuen.

Blaikie, P. y H. Brookfield. 1987c. Approaches to the study of land degradation. En P. Blaikie y H. Brookfield (coords.). *Land degradation and society* (27-48). Methuen.

Blauert, J. 1988. Autochthonous development and environmental knowledge in Oaxaca, Mexico. En P. Blaikie y T. Unwin (coords.). *En-*

vironmental crises in developing countries (33-54). Institute of British Geographers.

Boado, E. L. 1988. Incentive policies and forest use in the Philippines. En R. Repetto y M. Gillis (coords.). *Public policies and the misuse of forest resources* (165-203). Cambridge University Press.

Branford, S. y O. Glock. 1985 *The last frontier fighting over land in the Amazon*. Zed Books.

Browder, J. O. 1988a. The social costs of rain forest destruction: a critique and economic analysis of the 'Hamburger Debate'. *Interciencia*, *13*, 115-120.

Browder, J. O. 1988b. Public policy and deforestation in the Brazilian Amazon. En R. Repetto y M. Gillis (coords.). *Public policies and the misuse of forest resources* (247-297). Cambridge University Press.

Browder, J. O. 1989. *Fragile lands of Latin America: strategies for sustainable development.* Westview Press.

Brown, J. W. 1990. US policy in the crucial decade ahead. En J. W. Brown (coord.). *In the OS interest: resources, growth, and security in the developing world* (165-201). Westview Press.

Budiardjo, C. 1986. The politics of transmigration. *Ecologist*, *16*, 111-116.

Bull, D. 1982. *A growing problem is pesticides and the third-world poor.* Oxfam.

Bunker, S. G. 1980. The Impact of deforestation on peasant communities in the Medio Amazonas of Brazil. *Studies in Third-World Societies*, *13*, 45-60.

Bunker, S. G. 1982. "The cost of modernity, inappropriate bureaucracy, inequality, and development program failure in the Brazilian Amazon". *Journal of Developing Areas*, *16*, 573-596.

Bunker, S. G. 1984. Modes of extraction, unequal exchange, and the progressive underdevelopment of an extreme periphery the Brazilian Amazon, 1600-1980. *American Journal of Sociology*, *89*, 1017-1064.

Bunker, S. G. 1985a. *Underdeveloping the Amazon: extraction, unequal exchange, and the failure of the modern state*. University of Illinois Press

Bunker, S. G. 1985b. Misdirected expertise in an unknown environment: standard bureaucratic procedures as inappropriate technology on the Brazilian 'planned frontier'. En J. Hemming (coord.). *Change in the Amazon basin, volume ii: the frontier after a decade of colonization* (103-118). Manchester University Press.

Buttel, F. H. 1989. How epoch-making are high technologies? The case of biotechnology. *Sociological Forum*, *4*, 247-261.

Buttel, F. H. 1990. Biotechnology and agricultural development in the Third World. En H. Bernstein, B. Crow, M. Mackintosh y C. Martin (coords.). *The food question. profits versus people?* (163-180). Earthscan

Caldwell, L. K. 1988. Beyond environmental diplomacy: the changing institutional structure of international cooperation. En J. F. Carroll (coords.). *International environmental diplomacy: the management and resolution of transfrontier environmental problems* (13-27). Cambridge University Press.

Carney J. y M. Watts. 1990. Manufacturing dissent: work, gender and the politics of meaning in a peasant society. *Africa*, *60*, 207-241.

Chambers, R. 1983. *Rural development: putting the last first*. Longman

Chambers, R. 1987. *Sustainable liveliboods, environment and development. Putting poor rural people first. Discussion Paper, No. 240.* University of Sussex, Institute of Development Studies.

Chambers, R. y M. Leach. 1989. Trees as savings and security for the rural poor. *World Development*, *17*, 329-342.

Clarke, W. C. 1990. Learning from the past: traditional knowledge and sustainable development. *The Contemporary Pacific*, *2*, 233-253.

Cliffe, L. y R. Moorsom. 1979. Rural class formanon and ecological collapse in Botswana. *Review of African Political Economy*, *15-16*, 35-52.

Colburn, F. D. 1989. *Everyday forms of peasant resistance*. M. E. Sharpe.

Colchester M. 1986. Banking on disaster: international support for transmigration. *Ecologist*, *16*, 61-70.

Collins, J. L. 1986. Smallholder settlement of tropical South America: the social causes of ecological destruction. *Human Organization*, *45*, 1-10.

Collins, R. O. 1990. *The waters of the Nile: hydropolitics and the Jonglei canal, 1900-1988*. Clarendon Press.

Conroy, C. y M. Litvinoff. 1988. *The greening of aid sustainable livelihoods in practice*. Earthscan.

Corbridge, S. 1986. *Capitalist world development: a critique of radical development geography.* Macmillan.

Cummings, B. J. 1990. *Dam the rives, damn the people: development and resistance in Amazonian Brazil*. Earthscan.

Dankelman, I. y J. Davidson. 1988. *Women and environment in the third world: alliance for the future.* Earthscan.

Davison, Joan. 1987. Without land we are nothing: the effect of land-tenure policies and practices upon rural women in Kenya. *Rural Africana*, *27*, 19-33.

Deutsch, K. W. 1977. Some problems and prospects of ecopolitical research. En K. Deutsch (coord.). *Ecosocial systems and ecopolitics: a reader on human and social implications of environmental management in developing countries* (pp. 359-368). Unesco.

Dinham, B. y C. Hines. 1983. *Agribusiness in Africa*. Earth Resources Research.

Dogra, B. 1985. The World Bank vs the people of Bastar. *Ecologist*, *15*, 44-48.

Dove, M. R. 1986. Peasant versus government perception and use of the environment: a case-study of Banjarese ecology and river basin development in South Kalimantan. *Journal of Southeast Asian Studies*, *17*, 113-136.

Drucker, C. 1985. Dam the Chico: hydropower development and tribal resistance. *Ecologist*, *15*, 149-157.

Dryzek, J. S. 1987. *Rational ecology: environment and political economy*. Basil Blackwell.

Durning, A. B. 1990. Ending poverty. En L. R. Brown (coord.). *State of the world 1990: a workhatch institute report on progress toward a sustainable sociey* (135-153). Unwin Hyman.

Emel, J. y R. Peet. 1989. Resource management and natural hazards. En R. Peet y N. Thrift (coords.). *New models in geography: the political economy perspective* (49-76). Unwin Hyman.

Falkus, M. 1990. Economic history and environment in Southeast Asia. *Asian Studies Review*, *14*, 65-79.

Fearnside, P. M. 1986. Agricultural plans for Brazil's Grande Carajas Program: lost opportunity for sustainable local development? *World Development*, *14*, 385-409.

Fernandes, W. 1990. Forest policy: a solution to tribal deprivation? *Indian Journal of Social Work*, *51*, 35-56.

Fox, R C. 1988. Environment, tribe, politics and policy in Eastern Province, Kenya. En P. Blaikie y T. Unwin (coords.). *Environmental crises in developing countries* (83-110). Institute of British Geographers.

Franke, R. W. y B. H. Chasin. 1980. *Seeds of famine: ecological destruction and the development dilemma in the west African Sahel*. Allanheld Osmun.

Galtung, J. 1982. *Environment, development and militay activity: towards alternative security doctrines.* Universitetsforlaget.

García, R. V. 1981. *Nature pleads not guilty*. Pergamon Press.

George, S. 1985. *III Fares the land: essays on food, hunger and power*. Writers and Readers.

George, S. 1988. *A fate worse than debt*. Penguin.

Giddens, A. 1979. *Central problems in social theory: action, structure and contradiction in social analysis*. Macmillan.

Gill, S. y D. Law. 1988. *The global political economy: perspectives, problems and policies*. Harvester Wheatsheaf.

Gillis, M. 1987. Multinational enterprises and environmental and resource management issues in the Indonesian tropical forest sector. En C. S. Pearson (coord.). *Multinational corporations, environment, and the third world: business matter* (64-89). Duke University Press.

Gillis, M. 1988a. Indonesia: public policies, resource management, and the tropical forest. En R. Repetto y M. Gillis (coords.). *Public policies and the misuse of forest resources* (43-113). Cambridge University Press.

Gillis, M. 1988b. Malaysia: public policies and the tropical forest. En R. Repetto y M. Gillis (coords.). *Public policies and the misuse of forest resources* (pp. 115-164). Cambridge University Press.

Gillis, M. y R. Repetto 1988. Conclusion: findings and policy implications. En R. Repetto y M. Gillis (coord.). *Public policies and the misuse of forest resources* (385-410). Cambridge University Press.

Gladwin, T. N. 1987. Environment, development, and multinational enterprise. En C. S. Pearson (coord.). *Multinational corporations, environment, and the third world: business matters* (3-31). Duke University Press.

Godana, B. A. 1985. *Africa's shared water resources: legal and institutional aspect of the Nile, Niger and Senegal River Systems*. Frances Pinter.

Goldsmith, E. y N. Hildyard. 1984. *The social and environmental effects of large dams. Volume I*. Wadebridge Ecological Centre.

Goldsmith, E. y N. Hildyard. 1986. *The social and environmental effects of large dams. Volume II*. Wadebridge Ecological Centre.

Goodman, D., B. Sorj y J. Wilkinson. 1987. *From farming to biotechnology: a theory of agro-industrial development*. Basil Blackwell.

Guha, R. 1985. Forestry and social protest in British Kumaun, c.1893-1921. En R. Guha (coord.). *Subaltern Studies IV: writings on South Asian history and society* (54-100). Oxford University Press.

Guha, R. 1989a. *The unquiet woods: ecological change and peasant resistance in the Himalaya*. Oxford University Press.

Guha, R. 1989b. Saboteurs in the forest: colonialism and peasant resistance in the Indian Himalaya. En F. D. Colburn (coord.). *Everyday forms of peasant resistance* (64-92). M. E. Sharpe.

Guha, R. 1990. An early environmental debate: the making of the 1878 Forest Act. *Indian Economic and Social History Review*, *27*, 65-84.

Guha, R. y M. Gadgil. 1989. State forestry and social conflict in British India. *Past and Present*, *123*, 141-177.

Guimarães, R. P. 1989. The ecopolitics of development in Brazil. *CEPAL Review*, *38*, 89-103.

Guyer, J. y P. Peters. 1987. Conceptualizing the household: issues of theory and policy in Africa. *Development and Change*, *18*(2), 197-213.

Hafner, J. A. y Y. Apichatvullop. 1990. Farming the forest: managing people and trees in reserved forests in Thailand. *Geoforum*, *21*, 331-346.

Hall, A. 1987. Agrarian crisis in Brazilian Amazonia: the Grande Carajas Programme. *Journal of Development Studies*, *23*, 522-552.

Hall, A. L. 1989. *Developing Amazonia: deforestation and social conflict in Brazil's Carajas Programme*. Manchester University Press.

Hamilton, L. S. y A. J. Pearce. 1988. Soil and water impacts of deforestation. En J. Ives y D. C. Pitt (coords.). *Deforestation: social dynamics in watersheds and mountain ecosystems* (75-98). Routledge.

Hart G., A. Turton y B. White. 1989. *Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia*. University of California Press.

Haugerud, A. 1989. Land tenure and agrarian change in Kenya. *Africa*, *59*, 61-90.

Haynes, K. E. y Whittington Dale. 1981. International management of the Nile-stage three? *Geographical Review*, *71*, 17-32.

Hecht, S. B. 1984. Cattle-ranching in Amazonia: political and ecological considerations. En M. Schmink y C. H. Wood (coords.). *Frontier equation in Amazonia* (366-398). University of Florida Press.

Hecht, S. B. 1985. Environment, development and politics: capital accumulation and the livestock sector in eastern Amazonia. *World Development*, *13*, 663-684.

Hecht, S. B., A. B. Anderson y P. H. May. 1988. The subsidy from nature: shifting cultivation, successional palm forests, and rural development. *Human Organization*, *47*, 25-35.

Hecht, S. B. y A. Cockburn. 1989. *The fate of the forest. developers, destroyers and defenders of the Amazon*. Versa

Hedlund, H. 1979. Contradictions in the peripheralization of a pastoral society: the Maasai. *Review of African Political Economy*, *15-16*, 53-62.

Hettne, B. 1990. *Development theory and the three worlds*. Longman

Hirsch, P. 1990. Forests, forest reserve, and forest land in Thailand. *Geographical Journal*, *156*, 166-174.

Hirsch, P. y L. Lohmann. 1989. Contemporary politics of the environment in Thailand. *Asian Survey*, *29*, 439-451.

Hjort Af Ornas, A. y M. A. Mohamed Salih. 1989. *Ecology and politics: environmental stress and security in Africa*. Scandinavian Institute of African Studies.

Hong, E. 1987. *Natives of Sarawak: survival in Borneo's vanishing forests*. Institut Masyarakat.

Horowitz, M. M. 1986. Ideology, policy, and praxis in pastoral livestock development. En M. M. Horowitz y T. M. Painter (coords.). *Anthopo-*

logy and rural development in West Africa (251-272). Westview Press.

Horowitz, M. M. y P. D. Little. 1987. African pastoralism and poverty: some implications for drought and famine. En Michael H. Glantz (coord.). *Drought and hunger in Africa: denying famine a future* (59-82). Cambridge University Press.

Horowitz, M. M. y M. Salem-Murdock. 1987. The political economy of desertification in White Nile Province, Sudan. En P. D. Little y M. M. Horowitz (coords.). *Lands at risk in the third world: local-level perspectives* (95-114). Westview Press.

Howell, P., M. Lock y S. Cobb. 1988. *The Jonglei canal: impact and opportunity*. Cambridge University Press.

Hurst, P. 1990. *Rainforest politics: ecological destruction in South-East Asia*. Zed Books.

Jain, S. 1984. Women and people's ecological movement: a case-study of women's role in the Chipko movement in Uttar Pradesh. *Economic and Political Weekly*, *19*, 1788-1794.

Jodha, N. S. 1986. Common property resources and rural poor in dry regions of India. *Economic and Political Weekly*, *21*, 1169-1181.

Johnston, R. J. 1989. *Environmental problems: nature, economy and state*. Belhaven Press.

Kasten Jr., R. W. 1986. Development banks: subsidizing third-world pollution. *Washington Quarterly*, *9*, 109-114.

Kemf, E. 1990. *Month of pure light. the regreening of Vietnam*. The Women's Press.

Kenney, M. y F. Buttel. 1985. Biotechnology: prospects and dilemmas for third-world development. *Development and Change*, *16*, 61-91.

Kjekshus, H. 1977. *Ecology control and economic development in East African history: the case of Tanganyika, 1850-1950*. Heinemann.

Kloppenburg Jr. y J. Ralph. 1988. *First the seed: the political economy of piant biotechnology 1492-2000.* Cambridge University Press.

Kulkarni, S. 1983. Towards a social forest policy. *Economic and Political Weekly*, *18*, 191-196.

Lauren, P. G. 1982. War, peace and the environment. En R. N. Barret (coord.). *International dimensions of the environmental crisis* (pp. 75-90). Westview Press.

Leonard, H. J. 1985. Political and economic causes of third-world environmental degradation. En H. J. Leonard (coord.). *Divesting nature's capital: the political economy of environmental abuse in the third world* (93-136). Holmes and Meier.

Leonard, H. J. 1988. *Pollution and the shuffle for the world product: multinational corporations, environment, and international comparative advantage*. Cambridge University Press.

Le Prestre, P. G. 1989. *The World Bank and the environmental challenge*. Associated University Presses.

Little P. D. y M. M. Horowitz. 1987. *Lands at risk in the third world: local-level perspectives*. Westview Press.

Lohmann, L. 1990. Commercial tree plantations in Thailand: deforestation by any other name. *Ecologist*, *20*(1), 9-17.

Maathai, W. 1986. The green belt movement. En P. Ekins (coord.). *The living economy: a new economics in the making* (289-295). Routledge and Kegan Paul.

Mackenzie, F. 1986. Local initiatives and national policy: gender and agricultural change in Murang's district, Kenya. *Canadian Journal of African Studies*, *20*, 377-401.

Mackenzie, F. 1989. Land and territory: the interface between two systems of land tenure, Murang's district, Kenya. *Africa*, *59*, 91-109.

Mackenzie, J. M. 1988. *The empire of nature: hunting, conservation and British imperialism*. Manchester University Press.

Mandel, R. 1988. *Conflict over the world´s resources: background, trends, case-studies, and considerations for the future*. Greenwood Press.

Marston, S. A. 1983. Natural hazards research: towards a political economy perspective. *Political Geography Quarterly*, *2*, 339-348.

McCracken, J. 1987. Colonialism, capitalism and the ecological crisis in Malawi: a reassessment. En D. Anderson y R. Grove (coords.). *Conservation in Africa: people, policies and practice* (63-77). Cambridge University Press

McDowell, M. A. 1989. Development and the environment in ASEAN. *Pacific Affairs*, *62*, 307-329.

Mekvichai, B. 1988. *The teak industry in north Thailand: the role of a natural-resource-based export economy in regional development* [Tesis de doctorado, Cornell University].

Messerli, B. 1990. The Himalayan dilemma: crisis, pseudo-crisis, or supercrisis [ponencia]. *Conference on International Environmental and Resource Issues in the Ganges-Brahmaputra Basin*, School of Oriental and African Studies, Londres.

Mies, M. 1984. Capitalism and subsistence: rural women in India. *Development*, *4*, 18-24.

Mische, P. M. 1989. Ecological security and the need to reconceptualize sovereignty. *Alternatives*, *14*, 389-427.

Mortimore, M. 1989. *Adapting to drought farmers, famines and desertification in West Africa*. Cambridge University Press.

Myers, N. 1984. *The primary source: tropical forests and our future*. W. W. Norton and Company.

Myers, N. 1989. Population growth, environmental decline and security issues in sub-Saharan Africa. En A Hjort af Ornas y M. A. Mohamed Salih (coords.). *Ecology and Politics: Environmental Stress and security in Africa* (211-231). Scandinavian Institute of African Studies.

Nadkarni, M. V. 1989. *The political economy of forest use and management*. Sage Publications.

Neilands, J. B., G. H. Orians, Egbert. W. Pfeiffer, Alje Vennema y A. H. Westing. 1972. *Harvest of death: chemical warfare in Vietnam and Cambodia*. Free Press.

O'Brien, J. 1985. Sowing the seeds of famine: the political economy of food deficits in Sudan. *Review of African Political Economy*, *33*, 23-32.

O'Connor, J. 1989. Uneven and combined development and ecological crisis: a theoretical introduction. *Race and Class*, *30*, 1-11.

Okoth-Ogendo, H. W. O. 1989. Some issues of theory in the study of tenure relations in African agriculture. *Africa*, *59*, 6-17.

Omvedt, G. 1989. Ecology and social movements. En H. Alavi y J. Harris (coords.). *Sociology of developing societies: South Asia* (288-296). Macmillan.

Painter, M. 1987. Unequal exchange: the dynamics of settler impoverishment and environmental destruction in lowland Bolivia. En P. D. Linle y M. M. Horowitz (coords.). *Lands at risk in the third world: local-level perspectives* (164-191). Westview Press.

Pearson, C. S. 1985. *Down to business: multinational corporations, the environment, and development*. World Resources Institute.

Pearson, C. S. 1987. *Multinational corporations, environment, and the third world: business matters.* Duke University Press.

Peet, R. 1985. The social origins of environmental determinism. *Annals of the Association of American Geographers*, *75*, 309-333.

Peluso, N. L. 1988. *Rich forests, poor people and development: forest access control and resistance in Java*. Ph.D. thesis. Cornell University.

Peluso, N. L. y M. Poffemerger. 1989. Social forestry in Java: reorienting management systems. *Human Organization*, *48*, 333-344.

Peters, P. E. 1984. Struggles over water, struggles over meaning: cattle, water and the state in Botswana. *Africa*, *54*, 29-49

Pintz, W. 1987. Environmental negotiations in the Ok Tedi Mine in Papua New Guinea. En Charles S. Pearson (coord.). *Multinational corporations, environment, and the third world, business matters*, (35-63). Duke University Press.

Pittock, A. B., Mark. A. Harwell *et al*. 1985. *Environmental consequences of nuclear war. I. Physical and atmospheric effects*. John Wiley and Sons.

Pompermayer, M. J. 1984. Strategies of private capital in the Brazilian Amazon. En M. Schmink y C. H. Wood (coords.). *Frontier expansion in Amazonia* (419-438). University of Florida Press.

Porter, G. y D. J Ganapin Jr. 1990. Resources, population and the future of the Philippines. En J. W. Brown (coord.). *In the US interest: resources, growth, and security in the developing world* (59-88). Westview Press.

Ramos, A. R. 1984. Frontier expansion and Indian peoples in the Brazilian Amazon. En M. Schmink y C. H. Wood (coords.). *Frontier expansion in Amazonia* (83-104). University of Florida Press.

Ravenhill, J. 1990. The North-South balance of power. *International Affairs*, *66*, 731-748.

Redclift, M. 1984. *Development and the environmental crisis red or green alternatives?* Methuen.

Redclift, M. 1987. *Sustainable development: exploring the contradictions*. Methuen.

Repetto, R. 1988a. *The forest for the trees? Government policies and the misuse of forest resources.* World Resources Institute.

Repetto, R. 1988b. Overview. En R. Repetto y M. Gillis (coords.). *Public policies and the misuse of forest resources* (1-41). Cambridge University Press.

Repetto, R. y M. Gillis. 1988. *Public policies and the misuse of forest resources.* Cambridge University Press.

Rich, B. M. 1985. Multi-lateral development banks: their role in destroying the global environment. *Ecologist*, *15*, 56-68.

Richards, P. 1983. "Ecological change and the politics of African land use". *African Studies Review*, *26*(2), 1-72.

Richards, P. 1985. *Indigenous agricultural revolution: ecology and food production in West Ajika*. Hutchinson

Richards, P. 1990. Local strategies for coping with hunger: Central Sierra Leone and Northern Nigeria compared. *African Affairs*, *89*, 265-275.

Saldanha, I. M. 1990. The political ecology of traditional farming practices in Thana district, Maharashtra (India). *Journal of Peasant Studies*, *17*, 433-443.

Schmink, M. 1982. Land conflicts in Amazonia. *American Ethnologist*, *9*, 341-357.

Schmink, M. 1988a. A case-study of the closing frontier in Brazil. En D W. Attwood, T. C. Bruneau y J. G. Galaty (coords.). *Power and poverty: development and development projects in the third world* (135-153). Westview Press.

Schmink, M. 1988b. Big business in the Amazon". En J. S. Denslow y C. Padoch (coord.). *People of the tropical rain forest* (163-174). University of California Press

Schmink, M. y C. H. Wood. 1987. The 'political ecology' of Amazonia. En P. D. Little y M M. Horowitz (coords.). *Lands at risk in the third world: local-level perspectives* (38-57). Westview Press.

Schneider, A. 1989. *Deforestation and development in Canada and the tropics: the impact on people and the environment*. University College of Cape Breton, Centre for International Studies.

Schwartzman, S. 1989. Extractive reserves. the rubber-tappers' strategy for sustainable use of the Amazon rainforest. En J. O. Browder (coord.). *Fragile lands of Latin America strategies for sustainable development* (150-165). Westview Press

Scott, J. C. 1985. *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance.* Yale University Press.

Shanmugaratnam, N. 1989. Development and environment: a view from the South. *Race and Class*, *30*, 13-30.

Shenton, B. y M. Watts. 1979. Capitalism and hunger in Northern Nigeria. *Review of African Political Economy*, *15/16*, 53-62.

Shiva, V. 1987. People's ecology: the Chipko movement. En M Mendlovitz y R. B. J. Walker (coords.). *Towards a just world peace: perspectives from social movements* (253-270). Butterworths.

Shiva, V. 1988. *Staying alive: women, ecology and development*. Zed Books.

Shiva, V. y J. Bandyopadhyay. 1988. The Chipko movement. En J. Ives y D. C. Pitt (coords.). *Deforestation: social dynamics in watersheds and mountain ecosystems* (224-241). Routledge.

Skocpol, T. 1985. Bringing the state back in: strategies of analysis in current research. En P. B. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (coords.). *Bringing the state back in* (3-37). Cambridge University Press.

Smil, V. 1984. *The bad earth: environmental degradation in China*. Zed Press.

Smil, V. 1987. Land degradation in China: an ancient problem getting worse. En Blaikie y H. Brookfield (coords.). *Land degradation and society* (214-222). Methuen.

Susman, P., P. O'Keefe y B. Wisner. 1983. Global disasters: a radical interpretation. En K. Hewitt (coord.). *Interpretations of calamity from the viewpoint of human ecology* (263-283). Ailen and Unwin.

Thompson, J. T. 1985. The politics of desertification in marginal environments: the Sahelian case. En H. J. Leonard (coord.). *Divesting nature's capital: the political economy of environmental abuse in the third world* (227-262). Holmes and Meier.

Timberlake, L. 1988. *Africa in crisis: the causes, the curses of environmental bankruptcy*. Earthscan.

Tolba, M. K. 1987. *Sustainable development: constraints and opportunities*. Butterworths.

Toure, O. 1988. The pastoral environment of northern Senegal. *Review of African Political Economy*, *42*, 32-39.

Vail, L. 1977. Ecology and history: the example of Eastern Zambia. *Journal of Southern African Studies*, *3*, 129-155.

Walker, K. J. 1989. The state in environmental management: the ecological dimension. *Political Studies*, *37*, 25-38.

Waterbury, J. 1979. *Hydropolitics of the Nile valley*. Syracuse University Press.

Watts, M. 1983a. On the poverty of theory: natural hazards research in context. En K. Hewitt (coord.). *Interpretations of calamity from the viewpoint of human ecology* (231-262). Allen and Unwin.

Watts, M. 1983b. *Silent violence: food, famine and peasantry in Northern Nigeria*. University of California Press.

Watts, M. 1984. The demise of the moral economy: food and famine in a Sudano-Sahelian region in historical perspective. En E. Scott (coord.). *Life before the drought* (124-148). Allen and Unwin.

Watts, M. 1989. The agrarian question in Africa: debating the crisis. *Progress in Human Geography*, *13*, 1-41.

Watts, M. 1990. Peasants under contract: agro-food complexes in the third world. En H. Bernstein, B. Crow, M. Mackintosh y C. Martin (coords.). *The food question: profits versus people?* (149-162). Fatthscan.

Weber, T. 1987. *Hugging the trees: the story of the Chipko movement*. Viking.

Westing, A. H. 1976. *Ecological consequences of the second Indochina war.* Stockholm International Peace Research Institute.

Westing, A. H. 1980. *Warfare in a fragile work: military impact on the human environment*. Taylor and Francis.

Westing, A. H. 1984a. *Herbicides in war: the long-term ecological and human consequences*. Taylor and Francis.

Westing, A. H. 1984b. *Environmental warfare: a technical, legal and policy appraisal*. Taylor and Francis.

Westing, A. H. 1985. *Explosive remnants of war: mitigating the environmental effects*. Taylor and Francis.

Westing, A. H. 1986. *Global resources and international conflict: environmental factors in strategic policy and action*. Oxford University Press.

Whitehead, A. 1990. Food crisis and gender conflict in the African countryside. En H. Bernstein, B. Crow, M. Mackintosh y C. Martin (coords.). *The food question: profits venus people?* (54-68). Earthscan.

Whittington, D. y K. E. Haynes. 1985. Nile water for whom? Emerging conflicts in water allocation for agricultural expansion in Egypt and Sudan. En P. Beaumont and K McLachlan (coords.). *Agricultural development in the Middle East* (125-149). John Wiley and Sons.

Wijkman, A. y L. Timberlake. 1984. *Natural disasters: acts of God or acts of man?* Earthscan.

Wood, C. H. y M. Schmink. 1979. Blaming the victim: small-farmer production in an Amazon colonization project. *Studies in Third World Societies*, *7*, 77-93.

Worby, E. 1988. Livestock policy and development ideology in Botswana" En D. W. Attwood, T. C. Bruneau y J. G. Galaty (coords.). *Power and poverty: development and development prize in the third world* (155-180). Westview Press.

World Commission on Environment and Development. 1987. *Our common future*. Oxford University Press.

Zaman, M. Q. 1989. The social and political context of adjustment to river-bank erosion hazard and population resettlement in Bangladesh. *Human Organization*, *48*, 196-205.

4. Ecologías políticas postconstructivistas[*1]

Arturo Escobar[2]

Resumen: El autor aborda el campo de la ecología política como una importante área de estudio contemporáneo y presenta tres momentos en su evolución, describiendo los ejes, fortalezas y debilidades de cada uno. Señala que, aunque la gama de preguntas que estas tres generaciones han tratado de responder se mantiene estable, el campo de su acción ha crecido enormemente. Destaca que, en el desarrollo de estas etapas, se ha pasado de una atención a la epistemología hacia una atención a la ontología, profundizando su aporte a la comprensión del mundo. Realiza alcances a la relación teórica de este campo con acciones en el ámbito político. Concluye planteando una serie de preguntas todavía sin responder para las distintas generaciones de ecología política.

Palabras clave: ecología política, epistemología, ontología.

Resumo: O autor discute o campo da ecologia política como uma importante área de estudo contemporânea e apresenta três fases em sua evolução, descrevendo os eixos, pontos fortes e fracos de cada um. Constata que, embora

1 Este artículo es una reimpresión del artículo publicado originalmente en español en el número 2 de la Revista Sustentabilidades: Escobar, A. 2010. "Ecologías políticas postconstructivistas" *Revista Sustentabilidades*, *2*, 02-05.
*N. de T. Algunas citas dentro del texto no figuran en las referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen. Con el fin de respetar íntegramente el contenido y la forma del texto de origen, no se ha añadido, modificado ni completado ninguna cita.

2 De próxima aparición en M. Redclift y G. Woodgate (eds.). *International handbook of environmental sociology*, 2nd. edition. Elgar, Cheltenham, UK. Traducción de Eduardo Yentzen. Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA. Email: aescobar@email.unc.edu.
* N. de T. Este artículo fue publicado en: Escobar, A. (2010). *Postconstructivist political ecologies*. En M. Redclift & G. Woodgate (Eds.), *The international handbook of environmental sociology* (2nd ed., pp. 91–105). Edward Elgar Publishing.

o leque de questões que estas três gerações tentaram responder seja estável, seu campo de ação cresceu enormemente. Sublinha que o desenvolvimento destas fases, tem havido um foco de atenção para a epistemologia e a ontologia, para aprofundar sua contribuição para a compreensão do mundo. Realiza alcances a relação teórica deste campo com as ações a nível político. Conclui propondo uma série de perguntas ainda sem responder para as diferentes gerações de ecologia política.

Palavras-chave: ecologia política, epistemologia, ontologia.

Abstract: The author displays the field of political ecology as an important area of study and presents three moments in its evolution, describing the axes, strengths and weaknesses of each. It indicates that although the range of questions that these three generations have tried to respond maintains stable, the field of its action has grown enormously. He emphasizes that in the development of these stages, there has been a swift from an attention to epistemology towards an attention to ontology, deepening its contribution to the understanding of the world. The article shows the need to relate the theoretical aspects of this field of knowledge with actions at a political level. Finally, the author concludes raising a series of still un-answered questions to these three generations of political ecology.

Key words: political ecology, epistemology, ontology.

Tres generaciones de ecología política

La ecología política (EP) es un campo interdisciplinario que ha estado en desarrollo durante varias décadas; el proceso de construirla se ha caracterizado desde sus inicios por enriquecedoras discusiones epistemológicas, paradigmáticas, y políticas. Se reconoce ampliamente que emergió en los años setenta, a partir del entrelazamiento de varios marcos de comprensión ecológico-orientados y de la economía política. Vinculando estos dos campos, la EP ha buscado trabajar a través de sus respectivas carencias, a saber, la desatención de la ecología humana y cultural al poder y la subdesarrollada conceptualización de la naturaleza por parte de la economía política. De-

masiado atascada en el modo de pensar estructural y dualista, esta ecología política de "primera generación" (Biersack, 2006), ha dado paso durante la última década a lo que se podría llamar una ecología política de "segunda generación", diversamente nutrida por esas tendencias teóricas marcadas como "post" desde los años ochenta (posestructuralismo, posmarxismo, poscolonialismo), con lo que la ecología política de los últimos quince años ha sido un vibrante espacio inter- y transdisciplinario que permite abordar la investigación en muchas disciplinas (geografía, antropología, ecología, economía ecológica, historia ambiental, ecología histórica, estudios del desarrollo, estudios de ciencia y tecnología) y cuerpos teóricos (teoría liberal, marxismo, posestructuralismo, teoría feminista, fenomenología, teoría poscolonial, complejidad, y acercamientos de la ciencia natural, tales como ecología del territorio y biología de la conservación). Lo que distingue a esta EP de segunda generación de su precursora es su compromiso con las discusiones epistemológicas fomentadas por las posiciones teóricas conocidas como constructivismo y antiesencialismo.

Aunque muy provisionalmente, dada la novedad de las tendencias en referencia, podría decirse que una ecología política de "tercera generación" ha estado en ascenso durante los últimos cinco años. Con raíces en la EP de segunda generación y en las teorías sociales críticas de los años ochenta, esta EP emergente encuentra sus condiciones directas de posibilidad en las discusiones más recientes sobre epistemologías post representacionales en los estudios de geografía, ciencia y estudios de tecnología (STS), por una parte, y las ontologías planas y relacionales en antropología, geografía, estudios culturales y STS, por el otro. En el plano social, esta tendencia es influenciada por persistentes problemas ambientales para los cuales la EP no tenía respuestas completamente satisfactorias, y en tendencias de los movimientos sociales que resuenan con problemáticas similares. La diferencia dominante entre la EP de segunda y tercera generación es la atención que esta última presta a los temas de la ontología, además de los de la epistemología. Hoy, las tres EP se pueden considerar en juego en varios trabajos, aunque las orientaciones de la segunda fase son todavía dominantes. Si la EP1 se podría decir que era preconstructivista y la EP2 constructivista, a la EP3 se la puede referir como postconstructivista en

el sentido de que, al mismo tiempo que es informada por debates transformativos sobre constructivismo, antiesencialismo y antifundacionalismo que barrieron los mundos académicos críticos en las humanidades y las ciencias sociales en muchas partes del mundo, se construye sobre los esfuerzos para atravesar los callejones sin salida y predicamentos creados por el constructivismo, radicalizándolos, mientras que al mismo tiempo vuelve a las preguntas sobre "lo real". Como sugeriré, la EP3 emerge de transformaciones más amplias de la teoría social —de lo que se podría llamar un "giro ontológico" en teoría social, más en concreto a lo que un número de autores se refieren como "ontologías planas"—.

La gama de preguntas con las cuales estas distintas EP tratan, tanto en términos históricos como contemporáneos, se ha mantenido relativamente estable, aunque la lista de áreas problemáticas siga creciendo: la relación entre ambiente, desarrollo y movimientos sociales; entre el capital, la naturaleza y la cultura; producción, poder y ambiente; sexo, raza y naturaleza; espacio, lugar y territorio; conocimiento y conservación; evaluación económica y exterioridades; población, usos de la tierra y de los recursos; gobernabilidad ambiental; tecnología, biología, y política; y así sucesivamente. Esta gama de preguntas se refiere a problemas cuya misma prominencia provee de relevancia al campo; estos incluyen, entre otros, destrucción de la biodiversidad, tala de árboles, agotamiento de recursos, insustentabilidad, desarrollo, racismo ambiental, control de recursos genéticos y derechos de propiedad intelectual, bio y nanotecnologías; y problemas globales, tales como cambio climático, contaminación transfronteriza, pérdida de sumideros de carbono, transformación de los sistemas agrícolas y alimenticios, y cuestiones similares. Algunas tendencias recientes discuten la multiplicidad de mundos socionaturales o de culturas-naturalezas, ontologías relacionales versus dualistas, formas de análisis estructurales versus de análisis de redes, e incluso una renovación de la pregunta sobre qué constituye vida. Mientras estas preguntas son más insuperables teóricamente, parecen surgir con mayor claridad que nunca antes de lo social, debido en gran parte a la práctica de algunos movimientos sociales.

La sección siguiente de este capítulo trata de las epistemologías de la naturaleza y de sus implicaciones para la EP. En la tercera sección presento un esquema provisional de la EP de tercera generación.

Variedades de epistemologías de la naturaleza

El conocimiento de la naturaleza no es una simple cuestión de la ciencia, de la observación empírica o de la interpretación cultural. En la medida en que esta pregunta sea un aspecto central de cómo pensamos acerca de la actual crisis ambiental —y, por tanto, de la constitución de la EP— es importante tener una visión de la gama de posiciones respecto del tema. Proporcionar tal visión no es un esfuerzo simple porque lo que yace en el trasfondo de esta pregunta —además de intereses políticos y económicos— son epistemologías contrastantes y, en última instancia, mitos fundacionales y asunciones ontológicas sobre el mundo. El breve panorama de las posiciones presentadas a continuación se restringe a las ciencias sociales y naturales modernas.

Las epistemologías de la naturaleza tienden a organizarse alrededor de la línea divisoria esencialista/constructivista. Esencialismo y constructivismo ponen en contraste posiciones respecto a la relación entre conocimiento y realidad, el pensamiento y lo real. Sucintamente, el esencialismo es la creencia en que las cosas poseen una base constante, independiente del contexto y la interacción con otras cosas, que el conocimiento puede conocer de forma progresiva. Los seres concretos se desarrollan desde esta base, que encontrará a la postre un reflejo correspondiente en el pensamiento (v.g. con el estudio de las cualidades de las cosas para descubrir su esencia). El mundo, en otras palabras, es siempre predeterminado desde lo real. El constructivismo, por el contrario, acepta la conexión ineludible entre el sujeto y el objeto de conocimiento y, por tanto, la relación problemática entre el pensamiento y lo real. El carácter de esta relación abre diversidades de constructivismos.

Como es bien sabido, el posestructuralismo transformó la discusión sobre la epistemología en muchos campos, incluyendo aquellos referidos

a la naturaleza. Desde cierta perspectiva posestructuralista (Foucaultiano y Deleuziano, en particular) no puede haber un análisis materialista que no sea, al mismo tiempo, un análisis del discurso. El análisis postestructuralista del discurso es una teoría social, es decir, una teoría de la producción de realidad social que incluye el análisis de representaciones de la realidad como hechos sociales inseparables de lo que se piensa como "realidad material". El posestructuralismo trata al lenguaje no como un reflejo de la realidad, sino como constitutivo de ella. Este era el enfoque completo, por ejemplo, del orientalismo de Said (1979). Para algunos, no hay materialidad no mediada por el discurso, pues no hay discurso sin relación a la materialidad (Laclau y Mouffe, 1985). Discurso, tal como se emplea en estas aproximaciones, es articulación de conocimiento y poder, de declaraciones y visibilidades, de lo visible y lo oculto. El discurso es el proceso con el cual la realidad social llega a ser.

Hay un arsenal de posiciones epistemológicas a lo largo de la divisoria esencialismo/ constructivismo, desde el positivismo a las formas más recientes de constructivismo, cada uno con sus respectivos compromisos filosóficos y adhesiones políticas (véase Escobar, 2008, para una discusión más substancial). Las posiciones del constructivismo son difíciles de clasificar.

Las siguientes son vistas como las más sobresalientes en el campo naturaleza-cultura; no son propiamente escuelas distintas, sino posiciones parcialmente traslapadas. No constituyen de forma necesaria tendencias altamente visibles (algunas son marginales o disidentes dentro de sus campos, incluyendo el de la biología). Es discutible si todas se pueden describir en términos del programa de investigación del constructivismo, aunque en estos casos su efecto *vis à vis* el realismo epistemológico sea similar al de las propuestas constructivistas.

a) Constructivismo dialéctico. Además de la transformación del materialismo histórico mediante la ecología —las cuentas del capital reestructurando las condiciones de producción (O'Connor, 1988)— el marco marxista ha producido la influyente perspectiva de la dialéctica entre organismo y ambiente, en especial en el trabajo de los biólogos Levins y Lewontin (1985). Complicando el binarismo entre naturaleza y cultura,

estos biólogos contribuyeron a repensar las teorías basadas en esta hendidura, incluyendo la evolución y la relación ontogenia-filogenia, aunque las implicaciones de su trabajo para la ecología se hayan explorado menos. Una contribución similar, aunque desde diferentes fuentes, incluyendo teorías heterárquicas, viene del campo de la ecología histórica. Este campo estudia procesos de largo plazo en términos de paisajes cambiantes, definidos como la manifestación material —a menudo dialéctica— de la relación entre los seres humanos y el ambiente (Crumley, 1994).

Una muy diferente concepción del método dialéctico ha sido desarrollada por Murray Bookchin y la escuela de ecología social, empleando críticas del socialismo y del anarquismo al capitalismo, al Estado y a la jerarquía. Tejiendo juntos los principios del anarquismo social (v.g. sociedad descentralizada, democracia directa, tecnología humanista, éticas cooperativas, etc.), con lo que él ve como la dinámica natural que caracteriza a la evolución misma, Bookchin desarrolló un análisis sistémico de la relación entre la práctica natural y la social (1989[3];1990; Leff, 1998, para una crítica). La piedra angular de su marco de referencia es la noción del naturalismo dialéctico, es decir, la idea de que la naturaleza presupone un proceso dialéctico de despliegue hacia niveles siempre mayores de diferenciación y de sentido. Esta misma dialéctica se encuentra en el orden social; de hecho, la ecología social plantea una serie continua entre la evolución natural y social (entre las primeras y segundas naturalezas) y una tendencia general hacia el desarrollo, la complejización, y la autorganización. Expandiendo los *insights* de Bookchin, Heller (2000) identifica mutualismo, diferenciación y desarrollo como principios dominantes que afectan las continuidades entre vida natural y social y evolución natural y social. Para los ecologistas sociales, hay, entonces, un origen orgánico para todos los órdenes sociales; la historia natural es una llave para entender la transformación social.

b) Interaccionismo constructivo. Este acercamiento, propuesto por Susan Oyama, profundiza los *insights* de la biología dialéctica infundiéndolos con discusiones sobre constructivismo, incluyendo críticas feministas a la

3 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas de este artículo, demostrando una supresión de información de origen.

ciencia. El foco de Oyama está en la revisión del desarrollo biológico y de la evolución, tomando como punto de partida una crítica de explicaciones genecéntricas en la evolución (Oyama, 2000; 2006). La llamada de Oyama es hacia un acercamiento dinámico y holístico a los procesos biológicos, que ella adelanta, en su propio campo, con el concepto de "sistema de desarrollo" definido como "una heterogénea y causalmente compleja mezcla de entidades interactuantes e influencias" que produce el ciclo de desarrollo de un organismo (2000: 1). Ella también propone una epistemología del no dualismo, llamada interaccionismo constructive, que, más que confiar en una distinción entre lo construido y lo preprogramado ("realidad"), sostiene la idea de que "nuestra presencia en nuestro conocimiento, sin embargo, no es contaminación, como algunos temen, sino la propia condición para la generación de ese conocimiento" (2000: 150). La biología de Oyama "reconoce así nuestra propia parte en nuestra construcción de naturalezas internas y externas, y aprecia las perspectivas particulares para la empatía, la investigación y el cambio" (2000: 149).

c) Perspectivas fenomenológicas. Tim Ingold ha discutido sostenidamente contra la presunción cartesiana de las divisorias entre la humanidad y naturaleza, entre las cosas vivientes y las cosas no vivientes característica de la mayoría de los acercamientos neodarwinistas (1992). Además de la etnografía de grupos no occidentales, su fuente principal de inspiración para superar esta dualidad es la fenomenología, según la cual la vida sucede en el encuentro con el mundo en el cual moramos; antes de cualquier objetivación, percibimos el mundo porque actuamos en él, y similarmente descubrimos objetos significativos en el ambiente al movernos alrededor de él. De esta manera, las cosas no son ni "naturalmente dadas" ni "socialmente construidas", sino resultado de un proceso de co-construcción. En otras palabras, en realidad no nos acercamos al ambiente primariamente como un conjunto de objetos neutrales que esperan ser ordenados en términos de un proyecto cultural, aunque esto igualmente suceda (lo que Heidegger [1977b] llamó "enmarcamiento"); en vez de esta "operación de un diseñador", en la vida cotidiana, "la percepción directa del ambiente es un modo de involucramiento con el mundo, no un modo (desapegado) de construcción de él" (Ingold, 1992: 44). El conocimiento del mundo no

se obtiene tanto con la abstracción, sino con un proceso de "desarrollo de habilidades" que ocurre mediante el encuentro activo con los objetos (para los acercamientos relacionados con la biología, véase Maturana y Varela [1987]; en ciencias informáticas, Winograd y Flores [1986]).

d) Antiesencialismo posestructuralista. El esfuerzo de Donna Haraway de mapear "el tránsito a través de naturaleza y cultura" es el más sostenido acercamiento antiesencialista a la naturaleza. La noción de tránsito se dirige a algunas de las características principales de antiesencialismo, tal como la complicación de límites naturalizados y la ausencia de identidades cuidadosamente limitadas, naturaleza incluida. Para Haraway, contrario a la opinión del positivista en la cual el mundo/real informa al conocimiento, ocurre al revés: el conocimiento contribuye a hacer el mundo de manera profunda. La epistemología "sin cuerpo" de la ciencia del positivista ("el truco de Dios" de ver todo desde ninguna parte, como ella lo puso de manera descriptiva [1988: 188]), está en la raíz de la cultura moderna del patriarcado capitalista blanco, con su subordinación de la naturaleza, de las mujeres y de la gente de color. Haraway ofrece una lectura profundamente historicista de la fabricación de mundos socio-naturales, en particular por parte de la tecnociencia contemporánea. Construyendo desde otras proposiciones para una ciencia feminista, ella articula una epistemología alternativa del conocimiento que es situada y parcial pero que, no obstante, puede proveer consistentes y válidos relatos sobre el mundo (Haraway, 1988; 1989; 1991; 1997; 2003).

Mucho del trabajo que se realiza hoy en la interfaz naturaleza/cultura en antropología, geografía y feminismo ecológico sigue las restricciones de antiesencialismo, y sería imposible resumirlo aquí. Entre los principios básicos de estos trabajos están, primero, la idea de que la naturaleza tiene que estudiarse en términos de procesos y relaciones constitutivos —biológico, social, cultural, político, discursivo— que entran en su construcción; en segundo lugar, y en consecuencia, una resistencia a reducir el mundo natural a un único principio de determinación *omniabarcante* (sea genes, capital, evolución, leyes del ecosistema, discurso, o lo que sea). Los investigadores que siguen estos principios estudian la múltiple, multiforme, culturalmente mediada articulación entre biología e historia —como las

entidades biofísicas son introducidas a la historia social, y viceversa—; una sugerencia es que es posible hablar de diversos regímenes culturales para la apropiación de la naturaleza (v.g. régimen capitalista, como en las plantaciones; régimen orgánico, como en los modelos locales de la naturaleza de la gente no occidental; y tecnonaturalezas, como en las biotecnologías recientes; Escobar 1999). Sea hablando sobre bosques, biodiversidad o biotecnologías recientes, en estos análisis hay siempre mucha historia, cultura, política y una cierta (no todavía bastante) biología. Tercero, hay una preocupación por las diferencias biológicas y culturales según lo producido históricamente. A este respecto, hay un esfuerzo por ver tanto desde el centro —mirando procesos de producción dominantes de configuraciones socionaturales particulares— y desde los márgenes de las jerarquías sociales/naturales, donde las categorías estables se pueden poner en cuestión y donde pueden presentarse las nuevas visiones (Cuomo, 1998; Rocheleau, 1995a, 1995b; Rocheleau y Ross, 1995[4]). Como Rocheleau (2000 ; 2007 ; véase también Whatmore, 2005[5]) lo señala, necesitamos entender cómo los seres vivos y no vivos crean maneras de estar-en-su-lugar y estar-en-redes, con todas las tensiones, poder y afinidades que exige esta hibridación sin precedentes. Por último, hay una tensión reconstructiva en muchos de estos trabajos que implica prestar la atención a las situaciones particulares y a las biologías/ecosistemas concretos, y a los movimientos sociales que emergen desde una política de la diversidad y una preocupación por la naturaleza. La esperanza es que esta preocupación podría llevar a visualizar comunidades ecológicas nuevas —lo que Rocheleau finamente llama instancias de viabilidad ecológica—. Desde esta perspectiva, todas las EP se podría decir que son reconstructivas, en el sentido dado al término por Hess (2001) en el STS, para indicar un cambio hacia la visualización activa y la contribución a construcciones alternativas de mundo.

---

4 N. de T. En esta cita (Cuomo, 1998; Rocheleau, 1995a, 1995b; Rocheleau y Ross, 1995) existe una supresión de información relativa a las obras de Rocheleau (1995a, 1995b) y de Rocheleau y Ross (1995) en la lista de referencias bibliográficas. En consecuencia, se advierte una discrepancia entre las obras citadas y las registradas en ese artículo.

5 N. de T. Se observa una inconsistencia entre la fecha indicada en esta cita y la que figura en la lista de referencias bibliográficas.

Mientras que el constructivismo restauró una radical apertura al mundo, para sus críticos el precio fue su incapacidad para hacer proposiciones fuertes de la verdad en la realidad. Hay un creciente número de epistemologías que se podrían llamar neorrealistas, incluyendo las dos posiciones siguientes:

a) Neorrealismo de Deleuzian. Una no esencialista, aunque realista, visión del mundo existe en el trabajo de los filósofos Deleuze y Guattari (véase especialmente 1987; 1994). El punto de partida de Deleuze es que el mundo es siempre algo "en realización", no una colección estática de seres que el conocimiento represente de forma fiel; el mundo se compone de diferencias, y es la intensidad de estas mismas diferencias —flujos de materia y de energía— los que generan la variedad de las formas geológicas, biológicas y culturales que encontramos. La materia es considerada por Deleuze y Guattari como poseyendo sus propios recursos inmanentes para la generación de formas. Esta morfogénesis conducida a partir de la diferencia se liga a los procesos de autorganización que están en el corazón de la producción de lo real. La diferenciación está en curso, siempre subvirtiendo la identidad, mientras da lugar a las formas biofísicas y sociales concretas, el resultado de procesos de individuación que están emparentados y son siempre cambiantes. En vez de hacer que el mundo dependa de la interpretación humana, Deleuze alcanza la apertura convirtiéndolo en un creativo y complejizante espacio del "llegar a ser".

Uno de los problemas con la mayoría de las epistemologías y las ontologías de la naturaleza es que se basan enteramente en la experiencia humana; ellas distinguen entre lo real y lo no real, según lo que los seres humanos sean capaces de observar (De Landa, 2002). Necesitamos superar el "bagaje no realista" si queremos llegar a un nuevo compromiso ontológico con el realismo que nos permita hacer demandas sólidas sobre, por ejemplo, vacíos emergentes. "Deleuze es un filósofo tan atrevido —concluye De Landa— "porque crea un no-esencialismo realista" (2002: 11). Finalmente, De Landa aboga por una nueva forma de empirismo que permite que sigamos la aparición de formas heterogéneas y múltiples del campo más grande de lo virtual. Volveremos a esta discusión en la sección siguiente, cuando situemos la oferta deleuziana dentro de una tendencia

más amplia hacia "ontologías planas", teorías de ensamblajes, complejidad y autorganización.

b) Realismo holístico. Esta visión ha sido articulada lo más explícitamente posible por el teórico de la complejidad Brian Goodwin (2007). Su lectura de investigaciones sobre emergencia, redes y autorganización lo lleva a concluir que el significar, el lenguaje, las sensaciones y la experiencia no son la prerrogativa de seres humanos, sino se encuentran en todos los seres vivos; la creatividad es un aspecto inherente a todas las formas de vida, y es sobre esta base que se producen la coherencia y la integridad. Su propuesta es para una biología hermenéutica y un realismo holístico que acepte que la naturaleza se expresa en forma, en realidad corporalizada, y se abre hacia el rol epistemológico de las sensaciones y de las emociones. La implicación es que los científicos pueden convertirse en:

> … co-creadores de (el) mundo con seres que son mucho más parecidos a nosotros, cognoscitiva y culturalmente, de lo que hemos reconocido hasta ahora […] Estamos dentro de la historia de ese despliegue […] La tarea ante nosotros es la de repensar nuestro lugar en la corriente de la aparición creativa en este planeta en términos de una comprensión más profunda del proceso vivo que ahora está tomando forma. La vida de las formas, de la cual somos una parte, se despliega hacia patrones de belleza y de eficacia que satisfacen las necesidades cualitativas y cuantitativas de modo de mantener la diversidad de especies, de culturas, de idiomas y de estilos de vida (2007: 100, 101, 110).

¿Qué queda entonces de la pregunta de qué es la naturaleza? Dentro de una epistemología positivista, la naturaleza existe pre-dada y pre-discursiva, y las ciencias naturales postulan producir conocimiento confiable acerca de su funcionamiento. Para el interaccionista constructivista, por el contrario, "necesitamos cuestionar la idea que la naturaleza tenga una naturaleza unitaria, eterna, que sea independiente de nuestras vidas […] La naturaleza es múltiple pero no arbitraria" (Oyama, 2000: 143). El positivista puede responder que, si este es el caso, debe haber una invariante que permanece, una base central de las cosas que podemos conocer,

fallando así el punto puesto, por Oyama, que no puede haber solo una relación verdadera de "la naturaleza de la naturaleza". Mientras que para Leff (1986; 1993; 2002) la naturaleza es un dominio ontológico distinto, ha llegado a ser inextricablemente hibridada con la cultura y la tecnología, y crecientemente producida por nuestro conocimiento, para Ingold (1992: 44), la naturaleza solo existe como construcción de un observador; lo que importa para él es el ambiente, es decir, el mundo constituido en relación con las actividades de todos esos organismos que contribuyen a su formación. Mientras que para los ecologistas sociales la naturaleza es real y conocible, este realismo no es igual al del sujeto cartesiano, sino de un sujeto cognoscente que está profundamente implicado en el proceso mismo de "construcción del mundo". Para los antiesencialistas, en las humanidades y las ciencias sociales la realidad biofísica ciertamente existe, pero lo que cuenta más son las demandas de verdad que realizamos en nombre de la naturaleza, y cómo estas demandas de verdad autorizan agendas particulares que después dan forma a nuestro proceso social y biológico de ser y llegar a ser. A pesar de los acercamientos neorrealistas a la teoría de la complejidad, finalmente, la dominación continuada del realismo epistemológico debe ser reconocida; ella descansa no solo en su capacidad de recabar formas creíbles de conocimiento, sino también en sus numerosos vínculos con el poder: el vínculo entre ciencia, producción y tecnología; el énfasis actual en la producción de vida mediante el desarrollo de la racionalidad biotécnica; y en última instancia, su capacidad para hablar al logocentrismo occidental, con su sueño de una sociedad ordenada y racional, que la mayoría de los seres humanos han aprendido a depender y desear, y ahora reforzada por la naturaleza y los seres humanos genéticamente mejorados.

En otros términos, los positivistas son buenos en proveer información científica sobre aspectos biofísicos de la naturaleza, pero, con todo, no pueden explicar las diferencias en las relaciones naturaleza-cultura, puesto que para ellos la naturaleza es una e igual para toda la gente y situaciones; estas diferencias tienen implicaciones biofísicas que no saben ver o les cuesta trabajo explicar. Los constructivistas hacen un buen trabajo en términos de determinación de las representaciones o de los significados dados a la

naturaleza por las personas, y las consecuencias o impactos de esos significados en términos de qué se hace realmente a la naturaleza (v.g. Slater 2003[6], para el caso de las selvas tropicales). Esto es muy importante, aunque por lo regular eluden en conjunto la pregunta, central a los neorrealistas y a los dialécticos, del carácter ontológicamente específico de la realidad biofísica y estas últimas contribuciones a las sociedades humanas (Redclift, 2006). Finalmente, es todavía difícil ver cómo el neorrealismo derivado de la complejidad pueda darnos una lectura diferente de la dimensión cultural de las relaciones naturaleza-cultura. La de Leff es una tentativa inicial en esta dirección. Ingold (2000) también apunta en esta dirección con su insistencia respecto al carácter profundamente relacional de la realidad. Incluso con el resultado de procesos de individuación, las cosas no existen en el mundo real con independencia de sus relaciones. Y el conocimiento no es simplemente aplicado, sino generado en el curso de la experiencia vivida, incluyendo por supuesto encuentros con el ambiente. En suma, prever relaciones entre lo biofísico y lo cultural, incluyendo el conocimiento, que evite las trampas del constructivismo y del esencialismo, no es una tarea fácil. Este es uno de los ímpetus directrices de la ecología política emergente.

¿Una ecología política emergente? De las epistemologías a las ontologías

Las diversas oleadas de deconstrucción y acercamientos discursivos de las últimas décadas trajeron una crítica al realismo como postura epistemológica. Un número de muy interesantes tendencias teóricas sociales exigen en la actualidad, implícita o explícitamente, una vuelta al realismo; dado que no es una vuelta a los realismos ingenuos del pasado —en particular las versiones cartesianas— o al realismo de esencias o de entidades trascendentes, esas tendencias se podrían llamar neorrealistas o postconstructivistas. Como ocurre a menudo cuando está germinando un enfoque significativamente nuevo, parecen brotar visiones neorrealistas por todo el mundo en una amplia variedad de terrenos intelectuales e incluso políticos —desde la geografía, la antropología y los estudios culturales hasta la biología, la informática y la

6 N. de T. Esta cita no está en la lista de referencia, por lo que es una supresión de origen.

ecología—. Algunas de las principales categorías asociadas a estas diversas tendencias incluyen ensamblajes, redes y actores de redes, relacionalidad, ontologías no dualistas y relacionales, emergencia y autorganización, hibridación, virtualidad y similares. La tendencia recibe su combustible más directo del posestructuralismo y la fenomenología, y en algunas versiones del posmarxismo, teorías de "actores de redes" (ANT), teoría de la complejidad y filosofías de la inmanencia y de la diferencia; en algunos casos también es accionada por la investigación etnográfica con grupos a quienes se atribuye que encarnan ontologías relacionales o movimientos sociales que construyen sus estrategias políticas en términos de redes de relación dispersas. Tomadas en conjunto, estas tendencias revelan la tentativa de una mirada atrevida a la teoría social de una manera diferente en su totalidad —que se podría denominar "alternativa plana"—. El lenguaje utilizado para referirse a un conjunto de procesos y características es indicativo de este ángulo: plano versus jerárquico, horizontalidad *versus* verticalidad, relacional versus binario, autorganización *versus* estructuración, inmanencia y emergencia versus trascendencia, promulgación versus representación, atención a la ontología versus a la epistemología, y así sucesivamente. Lo que sigue es una mirada parcial y tentativa a esta tendencia. Aunque se podría decir que proporciona el material y los contornos para una EP postconstructivista, las tendencias en cuestión de ninguna manera son coherentes en su totalidad ni apuntan en la misma dirección. Más aún, debo subrayar que bien puede haber diversas genealogías en esto y en otras formas de ecología política en el momento presente.

En geografía, algunas de las intervenciones dominantes son las discusiones durante la última década sobre representaciones espaciales (Pickles, 2004) y teorías no-representacionales de (Thrift, 2007) "geografías híbridas" (Whatmore, 2002), "geografía humana sin escala" (Marston *et al*., 2005), y el seguimiento del debate en *Transacciones del Instituto de Geógrafos Británicos*, *32*(2), 2007; "ecologías emergentes" en términos de "redes enraizadas y *webs* relacionales (Rocheleau y Roth, 2007; Rocheleau *et al*., 2001[7]), y el cambio del dualismo a las ontologías relacionales

7 N. de T. La obra citada como *Rocheleau et al., 2001* no figura en la lista de referencias bibliográficas, es una supresión de origen.

(Castree, 2003; Braun, 2008). Una vez más, incluso dentro de la geografía, estos debates no se pueden decir que se relacionen con el mismo conjunto de temáticas, y en algunos casos están en tensión unos con otros. Tomados de conjunto, ellos construyen una discusión compleja sobre escala, espacio, lugar, ontología y teoría social, propiamente; por otra parte, la ecología, la "naturaleza" y la política se hallan a menudo (no siempre) presentes en estos debates, del modo más potente en los casos de Whatmore y Rocheleau. En estos trabajos hay una atención renovada a la materialidad, sea a través de focalizarse en la práctica, en las relaciones, en las redes, en las encarnaciones, en las *performances* o en los alcances entre los varios elementos de los dominios sociales y biofísicos. Las fuentes, sin embargo, son en absoluto variadas; algunas incluyen posestructuralismo y fenomenología (en algunos casos, este último vía el trabajo del influyente antropólogo Tim Ingold), con atención a la práctica y vinculación con el mundo, más que en su representación. En esos trabajos influidos por ANT y Deleuze y Guattari, el énfasis se pone en asegurar la producción de lo real mediante las multiformes relaciones que vinculan a actores humanos y no humanos, conexión antes tomada como un dato en la divisoria (naturaleza/cultura, sujeto/objeto, yo/otro) en procesos de producciones y arquitecturas de lo real en términos de redes, ensamblajes, y formaciones socio-naturales híbridas. El espacio ya no se considera más como algo ontológicamente dado, sino como el resultado de procesos relacionales.

En *Geografía humana sin escala*, por ejemplo, los autores establecen que la mayoría de los conceptos de escala siguen atrapados en una jerarquía y una verticalidad fundacionales, con problemas concomitantes tales como binarias prolongaciones micro-macro y global-local (Marston *et al*., 2005). Una parte importante del argumento de estos autores es que estos problemas no pueden solucionarse con sólo apelar a un modelo de red; el desafío no es sustituir un nexo "ontológico-epistemológico (verticalidad) por otro (horizontalidad)", sino evitar toda confianza en "cualquier predeterminación trascendente" (2005: 422; véase también el seguimiento a la discusión en *Transacciones del Instituto de Geógrafos Británicos 32*(2), 2007). Esto se lograría adoptando una ontología plana (en oposición a una horizontal) que deseche el "esencialismo centralizador que induce no solo el imaginario

vertical de arriba abajo, sino también la irradiacional (fuera de aquí) espacialidad de la horizontalidad" (2005: 422). Aquí, ontología plana refiere lo complejo, relaciones espaciales emergentes, autorganización y ontogénesis. "Superar los límites de ontologías globalizadoras" —concluyen estos autores— "requiere una sostenida atención a las relaciones íntimas y divergentes entre los cuerpos, los objetos, los órdenes, y los espacios" —es decir, a los procesos tras los cuales se forman los ensamblajes—; "los sitios" se convierten en una propiedad emergente de sus habitantes humanos y no humanos interactuantes. Esto es, podemos hablar de la existencia de un sitio dado solamente en cuanto podemos seguir las prácticas interactivas mediante sus conexiones localizadas (2005: 425). Si todo esto asciende a un reacondicionamiento completo de la noción de escala, sigue siendo una pregunta abierta (véase el debate). La proposición de Rocheleau de que los enfoques recientes de la teoría de redes que rechazan el pensamiento binario pueden ayudarnos a entender el mundo "como siempre ya conectado, acoplado en red" (Rocheleau y Roth, 2007: 433) y contribuyen a trabajar los problemas en teoría de redes señalados por Marston y otros; su atención a la dinámica ecológica, ausente en la mayor parte del trabajo de sus colegas, le permite hacer algunas proposiciones en particular apropiadas para la EP. En esta EP, las redes se conectan con lugares y territorios —a través del concepto antintuitivo de "redes arraigadas"— que ligan elementos sociales y naturales en formaciones dispersas y dinámicas. El desafío, tal como lo consideran Rocheleau y Roth, es el de "acoplar los dominios sociales, ecológicos y tecnológicos en teorías y modelos de redes arraigadas, telarañas relacionales y ensamblajes autorganizados, todo enlazado con el poder y ligado a los territorios a través de las escalas" (2007: 436). Esta es una propuesta particular y sólida dentro del campo de la EP3.

Los antropólogos están asimismo ocupados, con relativa independencia, pero con traslapes en aumento respecto de las tendencias geográficas recién descritas, desarrollando acercamientos nuevos a las preguntas sobre la relación naturaleza-cultura. Hay precursores ilustres en este esfuerzo, en particular Ingold (2000), Strathern (1980), Descola (1986) y Descola y Pálsson (1996). Un impulso principal es cómo estudiar de manera postconstructivista las comprensiones no occidentales de la naturaleza y del

ambiente, y por supuesto de un sistema entero de otras construcciones culturales tales como "persona", "propiedad", "economía". Además de orientaciones teóricas similares (ANT, Deleuze y Guattari, la fenomenología, y los enfoques de redes son las fuentes principales, como también en geografía), la investigación etnográfica con grupos no occidentales sigue siendo crucial (con gran presencia de etnografías de grupos melanesios; grupos indígenas andinos, amazónicos, y canadienses; y aborígenes australianos). Como es bien sabido, las etnografías de formaciones socio-naturales ya no se restringen a los contextos no occidentales; aquellos que siguen las aproximaciones ANT, como asimismo las influidas por el trabajo de Donna Haraway, han sido en particular prolíficas en el planteamiento de nuevas preguntas y metodologías, aunque no se revisen aquí por razones de espacio. Debe subrayarse, sin embargo, que, tomados en conjunto, los trabajos basados en la etnografía (en gran parte en antropología, pero algo en la geografía y el STS) destacan algunas de las mismas temáticas revisadas más arriba, pero también un conjunto particular y diferente; entre los más discutidos están los de inconmensurabilidad, traducción y otras formas de comunicabilidad entre mundos socionaturales distintos (Povinelli, 1995; 2001; Noble, 2007) y del grado en el cual estos mundos pudieron incorporar órdenes socio-naturales no-modernos, alternativos a lo moderno, u otros que no sean modernos —v.g. postliberal— (De la Cadena 2008; Escobar 2008; Blaser en prensa). De esta manera, la ecología política postconstructivista se convierte en una ontología política, una categoría por la cual Blaser (en prensa) ha abogado con toda claridad. Las implicaciones políticas de estas etnografías ontológicamente-enfocadas están también a menudo tratadas de forma explícita.

Una categoría emergente clave es la de las "ontologías relacionales" (véase también Braun (2007)[8] para la geografía). Se plantea esta noción como una manera de problematizar la ontología moderna comúnmente aceptada basada en binarismos tales como naturaleza (el dominio de objetos) y cultura (el dominio de temas). Algunos trabajos con grupos indígenas, afrodescendientes y otros comunitariamente-orientados en Sudamérica se han centrado en esta noción.

8 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas.

Como categoría de análisis, las "ontologías relacionales" señalan varios temas. Primero, constituye una tentativa de desarrollar una manera de hablar sobre formas emergentes de política no basadas en concepciones homogeneizadas del indigenismo, raza, o culturas e identidades esencializadas. En segundo lugar, es un concepto enraizado en la práctica que llama a la atención etnográfica sobre las distinciones y las relaciones que estos grupos generan en el extenso espectro de la vida y de las entidades no vivas; el concepto apunta, más que nada, al hecho de que muchos de estos grupos no piensan ni actúan en términos de los proverbiales binarios modernos. Incluso el binario moderno/indígena existe sobre todo para los modernos, en tanto los grupos indígenas están mejor equipados que los modernos para moverse mediante configuraciones socionaturales, justo porque piensan y actúan en términos profundamente relacionales y conectados. Desde la perspectiva política, las "ontologías relacionales" apuntan al hecho de que ellas han estado bajo ataque durante siglos, y aún más hoy, con la globalización neoliberal y sus nociones hipernaturalizadas de individuos, mercados, racionalidad y otros similares; referencias a la noción de Polanyi de los desacoplamientos se encuentran algunas veces en estos trabajos, con el concomitante movimiento cultural-político de promover re/acoplamiento de la "persona/economía" en sociedad/ naturaleza. La modernidad, de esta manera, no es solo sobre la supresión de los conocimientos subalternos, sino sobre la supresión verdadera de otros mundos, pidiendo así hacerse visible y adoptando "mundos y conocimientos diferentes" (Escobar, 2008; Santos, 2007).

En estos trabajos, cuestiones sobre las diferencias en todos los niveles —económicos, ecológicos, culturales, epistémicos y, en última instancia, ontológicos— son de importancia suprema, y a este nivel de EP3, se trata de una ecología política de la diferencia, o bien, otra vez, de una ontología política. En esta ontología política hay un descentramiento de la política moderna que se considera como siendo fomentado por los movimientos y los intelectuales indígenas mismos, que postulan, por ejemplo, la sensibilidad de todos los seres y movilizan este constructo en el campo político, e insisten en la persistencia de formas de política no liberales (v.g. comunitaristas), con lo que estos movimientos desequilibran el arreglo moderno por el cual solamente los científicos pueden representar la naturaleza, y la política solo se puede basar en estas representaciones; estos

grupos, por el contrario, afirman su derecho de representar entidades no humanas mediante otras prácticas, y tener en cuenta esas otras prácticas tanto como conocimiento y como política (De la Cadena, 2008). Una reciente propuesta, relacionada —aunque distinta—, apunta a pluralizar la modernidad desde la perspectiva del pensamiento relacional; conceptúa a la modernidad como multiplicidad, postulando la existencia de modernidades múltiples que no son variaciones de una sola modernidad (Grossberg, 2008)[9]. Un acercamiento final que tiene como objetivo las ontologías relacionales y el realismo postconstructivista viene de las ciencias de la informática; postula la necesidad de un pluralismo ontológico y un monismo metafísico (la unidad del mundo), en lo que un autor llama "inmanencia con una venganza" (Smith, 1993: 373)[10]. Una forma de leer la aparición de ontologías relacionales desde la perspectiva de estas diversas tendencias es como "un regreso de las multiplicidades".

La cuestión de la sensibilidad me trae al último cuerpo del trabajo al que me quisiera referir, aunque sea de paso. Me refiero al pequeño pero creciente número de aplicaciones de teorías de la complejidad, particularmente desde la biología, a los procesos socio-naturales. En estos trabajos, la comprensión de la complejidad natural en términos de procesos de auto-organización, emergencia, no-jerarquía, auto semejanza, y procesos dinámicos no lineales pueden proporcionar *insights* para un teoría social o socio-natural enteramente diferente (Taylor 2001; Hayla y Dyke 2006; Escobar 2008; Leff, 2000). Para los biólogos, un mensaje clave de mundos biológicos (de las neuronas a los ríos, de los átomos a la luz, de las especies a los ecosistemas y a la evolución) es la de auto-organización y de auto-semejanza. Algunos (Goodwin 2007) van más lejos al sugerir que el lenguaje y el significado son características de todos los seres vivos y no sólo de los seres humanos – en otras palabras, que el mundo es uno

9 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas. En dicha lista únicamente figura una obra del mismo autor con otra fecha de publicación: *Grossberg, L. (2007).*

10 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas. En dicha lista únicamente figura una obra del mismo autor con otra fecha de publicación: *Smith, B. C. (1996).*

de "pansensibilidad". ¿Cómo incorporamos esta sensibilidad seriamente, considerando que las epistemes modernas están basadas precisamente en el supuesto ontológico opuesto? La pregunta entonces se convierte en: ¿cómo podemos aprender a vivir dentro de ambos espacios y redes de manera creativa, con el espectro completo de seres vivientes y sensibles? Por supuesto, la idea de que los procesos materiales y biológicos podrían inspirar entendimientos sobre la vida social más allá de un nivel metafórico va a ser comprensiblemente resistida por muchos. Una posición que podría hacerla más atractiva a los constructivistas es pensar en la vida social y biológica en términos de ensamblajes a partir de un continuo de experiencia y materia que es a la vez auto- organizada como organizada-por-otro; de esta manera, no habría mundos biológicos y sociales o naturales y culturales separados. Uno podría entonces leer los *insights* de la complejidad como lecciones desde un tipo de teoría a otra y no desde un cierto reino biológico pre-dado *per se* (Rocheleau y Roth 2007; Escobar 2008).

Al menos, la complejidad y los acercamientos planos aparecen como propuestas viables para trabajar mediante dos de las características más perjudiciales de la teoría moderna: binarismos penetrantes y reducción de la complejidad; como las tendencias en geografía, antropología y el STS revisadas aquí, permiten la reintroducción de la complejidad en nuestras empresas intelectuales sobre lo real en un grado mayor que el de anteriores marcos teóricos. Mientras que algunos, quizá muchos, de los movimientos sociales de hoy también parecen apuntar intuitiva o explícitamente a una práctica informada por concepciones planas (v.g. redes de autorganización), sigue siendo necesario ver cómo se desarrollarán en términos de eficacia de su acción (Zibechi, 2006; Gutiérrez, 2006; Ceceña, 2008, para las lecturas de movimientos sociales latinoamericanos desde la perspectiva autónoma, de diversidad y de formas de políticas no centradas en el Estado). Resulta innecesario decir que hay necesidad de más investigación empírica y orientada al activismo sobre experiencias particulares.

El interés por las alternativas planas es, por supuesto, un signo de los tiempos. "Estamos cansados de los árboles", es la famosa denuncia de Deleuze y Guattari, dos de los profetas de este movimiento en la teoría social moderna. "Debemos dejar de creer en árboles, raíces y radículas. Han hecho

que suframos demasiado. Toda la cultura arborescente se funda en ellos, de la biología a la lingüística" (1987: 15). Lo que quieren decir con esto es que necesitamos movernos lejos de los modos de ver basados en binarismos, totalidades, estructuras generativas, unidades pre-presuntas, leyes rígidas, racionalidades logocéntricas, producción consciente, ideología, determinación genética, macropolíticas, y abrazar en cambio las multiplicidades, las líneas de vuelo, la indeterminación, los trazos, movimientos de desterritorialización y procesos de reterritorialización, procesos de llegar a ser, interfases, morfogénesis, rizomas, micropolíticas, diferencias y ensamblajes intensivos. Desde la biología a la informática, desde la geografía a los movimientos sociales, desde algunos teóricos críticos a numerosos grupos y activistas indígenas y grupos con base local, este es un mensaje potente que puede por lo menos ser recomendablemente oído.

Las alternativas planas y las epistemologías del postconstructivismo también contribuyen a poner los temas del poder y de la diversidad en la agenda de una manera única. Si las actuales diferencias económicas, ecológicas y culturales pueden considerarse como casos de diferencias intensivas y si, por otra parte, estas se pueden ver como promulgaciones de un campo mucho más grande de la virtualidad, significa que el espectro de estrategias, de visiones, de sueños y de acciones es mucho más grande de lo que pudieran sugerir las miradas convencionales del mundo. El desafío es traducir estos *insights* en estrategias políticas que incorporen modos múltiples de conocimiento y a la vez evitar la trampa de caer de nuevo dentro de modos de pensar, ser y hacer modernistas. Todavía es demasiado pronto para decir si una ecología política se aliará fuera de estas tendencias en cierta medida novedosas y diversas, pero parece que hay un gran entusiasmo en el pensar de nuevo teórica y políticamente sobre la diferencia; de este impulse, de hecho, podría emerger una ecología política postconstructivista y reconstructivista.

Las implicaciones políticas de la relacionalidad, al final, han sido delineadas de forma admirable por Doreen Massey. Primero, una política de la responsabilidad es un *sequitur* del hecho de que el espacio, el lugar y las identidades se construyen relacionalmente. Estamos todos implicados en conexiones, y debemos estar en conocimiento de este hecho de tal manera

que nos permita actuar con responsabilidad hacia esas entidades con las cuales estamos conectados —tanto humanas como no humanas—. El análisis de estas "geografías más amplias de construcción" (Massey, 2004: 11) es central para este darse cuenta. En segundo lugar, necesitamos estar atentos a que el reconocimiento de la relacionalidad "apunta a una política de la conectividad […] cuya relación con la globalización variará dramáticamente de lugar en lugar" (2004: 17); esto pide una cierta clase de aterrizaje etnográfico a esa política (en un sentido más amplio del término, es decir, en términos de contrato substancial con los lugares y las conexiones concretas). Tercero, la geografía de la responsabilidad que emerge desde la relacionalidad también nos lleva a preguntar: ¿"Qué, en otras palabras, acerca de la cuestión del extranjero *sin*" (2004: 6, énfasis en el original), de nuestro "serarrojadosjuntos"? Esto se vincula de forma ineludible con los temas de cultura, subjetividad, diferencia y naturaleza. La siguiente cita resume estas nociones: "El mismo reconocimiento de nuestra interrelacionalidad constitutiva implica una espacialidad; y eso alternadamente implica que la naturaleza de esa espacialidad debe ser una avenida crucial de la investigación y del contrato político" (Massey, 2005: 189). En última instancia, uno puede agregar qué espacialidad se relaciona con ontología. Al acentuar una territorialidad alternativa, por ejemplo, muchos movimientos de minorías étnicas en América Latina no solo están haciendo visible la espacialidad liberal de la modernidad (del Estado nación a las localidades), sino se están imaginando geometrías de poder que encajan el principio de relacionalidad dentro de ellas.

Sigue habiendo muchas preguntas que han de ser articuladas y tratadas, como, por ejemplo, si esta reconstitución de la EP en términos de tres configuraciones diferentes tiene sentido, ¿cuáles son las continuidades y discontinuidades entre ellas, en particular entre la segunda y tercera EP? No está claro cómo la EP3 reconstruye la comprensión del poder y de la producción que eran centrales en la EP2, por ejemplo. Una pregunta relacionada es: ¿Cómo la atención a la ontología en la EP3 influyen en nuestra comprensión del papel del conocimiento, y qué otras epistemologías pudieron ser concebidas? Otra pregunta: ¿Cuáles son las implicancias metodológicas de abrazar esta clase de cambios epistemológicos y ontológicos? Estas metodologías tendrían

que lidiar con los tipos de realismo postconstructivista repasados aquí, pero también con las demandas planteadas desde la relacionalidad; dado que la mayoría de las metodologías de investigación operan en gran medida en base a las polaridades sujeto/objeto, representación/distinciones reales (a pesar de muchas de la reflexión posmoderna), las respuestas a estas preguntas no son directas. Otro grupo de preguntas puede referirse a cómo los actores no académicos (los activistas, los agriculturalistas, los protectores de semillas, los defensores de la pluralidad de especies, los armadores de redes de diversas clases) tratan algunos de estos temas. ¿Cómo lo hacen en su práctica ontológico-política? Por último, ¿puede la EP3 llegar a dar marco teórico a temas de sustentabilidad y conservación de manera efectiva, dado que estos conceptos han sido delineados en gran medida por el conocimiento experto no constructivista y marcos teóricos modernistas? ¿Cómo sería embarcarse en los tipos de diseño ontológico requeridos para generar la sustentabilidad ecológico-cultural de mundos socio-naturales y relacionales?

Reconocimientos

Quisiera agradecer a Dana Powell y Brenda Baletti por sus comentarios detallados sobre el primer esbozo de este capítulo. El capítulo es parte de conversaciones en curso con diversos interlocutores, en particular Marisol de la Cadena, Mario Blaser, Eduardo Gudynas, Dianne Rocheleau, John Pickles y Larry Grossberg.

Notas

1. Para declaraciones ampliamente conocidas sobre ecología política, Biersack y Greenberg (2006), Haenn y Wilk (2005), Paulson y Gezon (2005), Brosius (1999), Bryant y Bailey (1997), Rocheleau *et al.* (1996), Peet y Watts (1996), Schmink y Wood (1987) y Martínez (2002). Debo mencionar que no me ocuparé aquí de los interesantes debates en ecología política latinoamericana (o los de otras partes del mundo de los que puedo ser ignorante).

Hay una tradición de ecología política latinoamericana relacionada pero distinta, y también desarrollos nacionales importantes en muchos países (e.g. México, Brasil, Colombia, Argentina). Esta tradición —que merecería su propio estudio— no encajaría fácilmente en las categorías usadas en este capítulo para los trabajos anglosajones, y desafortunadamente muy poco de ella se ha traducido al inglés. El Grupo de Trabajo sobre Ecología Política del Clacso ha sido muy productivo en las últimas décadas. Para recientes reunions y publicaciones, véase http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa-regional-de-grupos-de- trabajo/documentos-de-los-grupos/memoria-del-gt-ecologia-politica

2. Oyama proporciona la siguiente definición desde la biología: "Por 'esencialista', significo una suposición de que los seres humanos tienen una naturaleza universal subyacente que es más fundamental que cualquier variación que pueda existir entre nosotros, y que está en cierto sentido siempre presente —quizá como "propensión"—, incluso cuando no es actualmente discernible" (2000: 131).

3. Véase, por ejemplo, Brosius (1999), Biersack (1999; 2006), Escobar (1999) y Peet y Watts (1996), para las revisiones de las tendencias en el posestructuralista antiesencialismo en estudios de la naturaleza en antropología y geografía. Es importante mencionar que las alternativas y las teorías planas de la complejidad y de la autorganización no han emergido en un vacío; la historia de sus antecedentes más importantes se menciona rara vez, puesto que pertenecen a las tradiciones del pensamiento que caen fuera del alcance inmediato de las ciencias sociales. Estos incluyen teorías de la cibernética y teorías de la información en los años cuarenta y cincuenta; teorías de sistemas desde los cincuenta; teorías tempranas de la autorganización; la biología fenomenológica de Maturana y Varela (1987). Más recientemente, las fuentes de alternativas planas incluyen algunos filamentos de pensamiento en ciencia e informática cognitiva, computación, teorías de la complejidad en biología, teorías de red en las ciencias físicas, naturales y sociales, y el 'neorrealismo' de Deleuze y Guattari. El concepto de Foucault de *eventalization* se asemeja a propuestas recientes en teoría de ensamblaje. Deleuze y Guattari han inspirado algunos de estos

desarrollos, incluyendo la teoría neorrealista de ensamblaje de Manuel de Landa (2002; 2006). Finalmente, debe mencionarse que la lógica de redes de distribución discutida en muchas de las tendencias aquí revisadas lleva a una lógica diferente de lo político, así como una cantidad de observadores de los movimientos sociales lo están señalando; esto incluye lo que se ha llamado una "política cultural de lo virtual", entendida como la apertura de lo real/actual a la acción de fuerzas que pueden actualizar lo virtual de diferentes maneras (Terranova, 2005; Escobar y Osterweil, en prensa; Grossberg, 2008[11]). Desde el campo de la informática, véase la persuasiva tentativa de Cantwell de desarrollar una epistemología post-representacional. Véase Escobar (2008, capítulo 6) para una discusión extensa sobre algunos de los aspectos discutidos en este capítulo, incluyendo aquellos en esta nota de pie de página.

Referencias[12]

Biersack, A. 2006. Introduction. En Aletta Biersack y James Greenberg (coords.). *Re-imagining political ecology* (3-40). Duke University Press.

Biersack, A. 1999. Introduction: from the 'new ecology' to the new ecologies. *American Anthropologist*, *101*(1), 5-18.

Biersack, A. y J. Greenberg. 2006. *Re-imagining political ecology*. Duke University Press.

Blaser, M. (en prensa). *Storytelling globality: a border dialogue ethnography of the Paraguayan Chaco*. Duke University Press.

Bookchin, M. 1986. *Post-scarcity anarchism*. Black.

11 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas. En dicha lista únicamente figura una obra del mismo autor con otra fecha de publicación: *Grossberg, L. (2007).*

12 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original. Finalmente, algunas referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Bookchin, M. 1990. *The philosophy of social ecology*. Black Rose.

Braun, B. 2008. Environmental issues: inventive life. *Progress in Human Geography*, *32*(5), 667-679.

Brosius, P. 1999. Analyses and interventions. Anthropological engagements with environmentalism. *Current Anthropology*, *40*(3), 277-309.

Bryant, R. y S. Bailey. 1997. *Third world political ecology*. Routledge.

Cadena, M. de la. 2008. Taking indigenous politics in its own terms requires an analysis beyond 'politics. Ms. Davis: Department of Anthropology, University of California. [Inédito].

Castree, Noel. 2003. Environmental issues: relational ontologies and hybrid politics. *Progress in Human Geography*, *27*, 203-211.

Ceceña, A. E. (2008), *Derivas del mundo en el que caben todos los mundos*. Siglo XXI / Clacso.

Crumley, C. 1994. *Historical ecology. Culture nature and changing landscapes*. SAR Press,

Cuomo, C. 1998. *Feminism and ecological communities*. Routledge.

Deleuze, G. y F. Guattari. 1987. *A thousand plateaus*. University of Minnesota Press.

Deleuze, G. y F. Guattari. 1994. *What is philosophy?* Columbia University Press.

Descola, P. 1986. *La nature domestique: symbolisme et praxis dans l'ecologie des Achuar*. Maison des Sciences de l'Homme.

Descola, P. y G. Pálsson. 1996. *Nature and society. Anthropological perspectives*. Routledge.

Escobar, A. 1999. After nature: steps to an anti-essentialist political ecology. *Current Anthropology*, *40*(1), 1-30.

Escobar, A. 2008. *Territories of difference: place, movements, life, redes*. Duke University Press.

Escobar, A. y M. Osterweil. (en prensa). En C. Bruun Jensen y K. Rödje (eds.). *Deleuzian intersections in science, technology, and anthropology*. Berghahn.

Goodwin, B. 2007. *Nature's due: healing our fragmented culture*. Floris Books.

Grossberg, L. 2007. *Critical studies in search of modernities*. University of North Carolina. [Inédito].

Gutiérrez, R. 2006. *¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha social*. Casa Juan Pablos / CEAM / Tinta Limón.

Haenn, N. y R. Wilk (eds.). 2005. *The environment in anthropology*. New York University Press.

Haila, Y. y C. Dyke (eds.). 2006. *How nature speaks. The dynamic of the human ecological condition*. Duke University Press.

Haraway, D. 1988. Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, *14*(3), 575-99.

Haraway, D. 1989. *Primate visions*. Routledge.

Haraway, D. 1991. *Simians, cyborgs and women. the reinvention of nature*. Routledge.

Haraway, D. 1997. *Modest witness@second millenium. femaleman meets oncomouse: feminism and technoscience*. Routledge.

Haraway, D. 2003. *The companion species manifesto*. Prickly Paradigm Press.

Heller, C. 2000. *Ecology of everyday life*. Black Rose.

Hess, D. 2001. Ethnography and the development of science and technology studies. En P. Atkinson, S. Delamont, A.J. Coffey, J. Lofland y l.H. Lofland (eds.). *Handbook of ethnography* (234-245). Sage.

Ingold, T. 1992. Culture and the perception of the environment. En E. Croll y D. Parkin (coords.). *Bush base: forest farm* (39-56). Routledge.

Ingold, T. 2000. *The perception of the environment*. Routledge.

Laclau, E. y C. Mouffe. 1985. *Hegemony and socialist strategy*. Verso.

Landa, M. de. 2002. *Intensive science and virtual philosophy*. Continuum Press.

Landa, M. de. 2006. *A new philosophy of society. Assemblage theory and social complexity*. Continuum Press.

Latour, B. 1993. *We have never been modern*. Harvard University Press.

Leff, E. 1993. Marxism and the environmental question. *Capitalism, Nature, Socialism*, *4*(1), 44-66.

Leff, E. 1998. Murray Bookchin and the end of dialectical materialism. *Capitalism, Nature, Socialism*, *9*(4), 67-93.

Leff, E. 2002. *Saber ambiental*. Siglo XXI.

Leff, E. (ed.). 1986. *Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo*. Siglo XXI.

Leff, E. (ed.). 2000. *La complejidad ambiental*. Siglo XXI.

Levins, R. y R. Lewontin. 1985. *The dialectical biologist*. Harvard University Press.

Marston, S., J. P. III Jones y K. Woodward. 2005. Human geography without scale. *Transactions of the Institute of British Geography*, NS 30, 416-432.

Martínez Alier, J. 2002. *The environmentalism of the poor. A study of ecological conflicts and valuation*. Elgar.

Massey, D. 2004. Geographies of responsibility. *Geografiska Annaler*, *86B*(1), 5-18.

Massey, D. 2005. *For space*. Sage Publications.

Maturana, H. y F. Varela. 1987. *The tree of knowledge*. Shambhala.

Noble, B. 2007. Justice, transaction, translation: blackfoot tipi transfers and WIPO's search for the facts of traditional knowledge exchange". *American Anthropologist*, *109*(2), 338-349.

O'Connor, J. 1998. *Natural causes*. Guilford Press.

Oyama, S. 2000. *Evolution's eye. A systems view of the biology-culture divide*. Duke University Press.

Oyama, S. 2006. Speaking of nature. En H. Yrjö y D. Chuck (coords.). *How nature speaks. The dynamic of the human ecological condition* (pp. 49-66). Duke University Press.

Paulson, S. y L. Gezon. 2005. *Political ecology across spaces, scales, and social groups*. Rutgers University Press.

Peet, R. y M. Watts. 1996. *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge.

Pickles, J. 2004. *A history of spaces. Cartographic reason, mapping and the geo-coded world*. Routledge.

Povinelli, E. 1995. Do rocks listen? The cultural politics of apprehending Australian aboriginal labor. *American Anthropologist*, *97*(3), 505-518.

Povinelli, E. 2001. Radical worlds: the anthropology of incommensurability and inconceivability. *Annual Review of Anthropology*, *30*, 319-334.

Redclift, M. 2006. *Frontiers. Histories of civil society and nature*. MIT Press.

Rocheleau, D. y R. Roth. 2007. Rooted networks, relational webs and powers of connection: rethinking human and political ecologies. *Geoforum*, *38*, 433-437.

Said, E. 1979. *Orientalism*. Vintage Books.

Santos, B. de S. 2006. *The rise of the global left: the world social forum and beyond*. Zed Books.

Schmink, M. y C. Wood. 1987. The "political ecology" of Amazonia". En P. Little y M. Horowitz (coords.). *Lands at risk in the third world* (38-57). Westview Press.

Smith, B. C. 1996. *On the origin of objects*. MIT Press.

Strathern, M. 1980. No nature, no culture: the Hagen case. En C. MacCormack y M. Strathern (coords.). *Nature, culture, and gender* (174-222). Cambridge University Press.

Taylor, M. 2001. *The moment of complexity. Emerging network culture*. University of Chicago Press.

Terranova, T. 2004. *Network culture*. Pluto Press.

Thrift, N. 2007. *Non-representational theory: space, politics, affect*. Routledge.

Whatmore, S. 2002. *Hybrid geographies: natures, cultures, spaces.* Routledge.

Winograd, T. y F. Flores. 1986. *Understanding computers and cognition*. Ablex Publishing Corporation.

Zibechi, R. 2006. *Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales*. Tinta Limón.

5. La territorialidad humana: una evaluación ecológica[1]

Rada Dyson-Hudson y Eric Alden Smith

El problema de la territorialidad humana ha constituido el foco de muchas discusiones y controversias (Crook, 1973; Esser, 1971). Los análisis de la organización espacial humana han tendido a polarizarse alrededor de una u otra de estas posturas:

—o bien los seres humanos son territoriales por naturaleza,

—o bien no lo son.

En un extremo, Ardrey (1966: 1) pensó que la territorialidad sería una forma de comportamiento fijada genéticamente que evolucionó en la mayoría de las especies, incluyendo la nuestra. Cohen (1976: 55) cree que existe una fundamental "tendencia humana (sea instintiva, sea de origen cultural) a lograr control territorial". En sentido opuesto, datos que indican ausencia de territorialidad rígida en muchos grupos cazadores y recolectores de nuestros días han sido vistos como soporte para argumentar que los seres humanos no serían territoriales por naturaleza (Reynolds, 1966: 449). La discusión sobre la territorialidad en antropología ha focalizado primordialmente los cazadores-recolectores. King (1975; 1976) y Peterson (1975) son ejemplos recientes de una larga serie de antropólogos (Radcliffe-Brown, 1930; Service, 1962; Williams, 1974) que sostuvieron que, bajo todas o la mayoría de las condiciones ecológicas, el pautamiento óptimo de la organización espacial de los cazadores-recolectores sería alguna forma de banda territorial. Varios autores (por ejemplo, Lee y DeVore, 1968; Damas, 1969) han sostenido que en los cazadores- recolectores sería típica una pauta más flexible de organización espacial y uso de recursos. Sin embargo, ambos

1 Publicado originalmente en: Rada Dyson-Hudson y Eric Alden Smith,, 1978, "Human territoriality: an ecological reassessment", *American Anthropologist*, 80(1): 21-41.

enfoques pasan por alto la diversidad de organización social y territorial de los cazadores-recolectores (Martin, 1974) y no toman en cuenta de forma adecuada los efectos que los diferentes planteamientos de la distribución de recursos tienen sobre los de la organización espacial. Aun cuando señalan variantes de la organización espacial humana, con frecuencia las presentan como desviaciones desde alguna norma natural u óptima.

La investigación sociobiológica actual indica la enorme complejidad de la territorialidad animal, paralela a la complejidad de organización espacial que vemos en los grupos humanos. Para analizar la diversidad de la organización espacial de los animales, los sociobiólogos y ecólogos han desarrollado una teoría general de la posibilidad de defensa [*defendability*] económica de los recursos, la cual nos permite plantear interrogantes más interesantes y refinadas que las que han dominado en el pasado los análisis de la territorialidad humana.

Pensamos que el tema de la territorialidad humana puede enfocarse analizando los datos antropológicos desde una perspectiva teórica sólida, utilizando los modelos desarrollados por diversos biólogos, y que este enfoque será útil para explicar la diversidad de la organización espacial humana (de hecho, son similares a algunas ideas —implícitas o explícitas— contenidas en el estudio de ecología humana hecho por Steward en 1938). En particular, los contextos y consecuencias ecológicas del comportamiento humano deben recibir atención mucho más extensa y rigurosa que lo que ha sido típico de los estudios de antropología ecológica o etología popular. Sugerimos que, en lugar de dedicar nuestras energías a problemas tales como ¿es el *Homo sapiens* una especie innatamente territorial?, deberíamos examinar la defensa y utilización humanas de los recursos dentro de un marco adaptativo.

El objetivo de este artículo es ampliar nuestro conocimiento acerca de la ecología del comportamiento de la especie humana en cuanto a la defensa de los recursos y a la organización espacial, mediante el análisis de algunos datos interculturales (multipoblacionales) en el marco teórico de la sociobiología (Wilson, 1975) y de la ecología evolutiva (Crook, 1970; Pianka, 1974). Primero resumiremos algunos recientes avances en el estudio de la territorialidad animal y de la utilización de recursos, y presentaremos un

modelo general que relacione la distribución de recursos con la organización espacial. Luego examinaremos la relevancia que tienen esos conceptos para el caso humano mediante el análisis de predicciones que surjan del modelo, a la luz de datos sobre diversas poblaciones localmente adaptadas en las que las relaciones entre la organización social y los parámetros ambientales sean más susceptibles al análisis ecológico.

No intentamos ofrecer aquí una revisión general de la territorialidad humana. Más bien deseamos aplicar el modelo ecológico presentado en el siguiente párrafo a tres ejemplos seleccionados, a manera de un sometimiento a prueba preliminar de su utilidad explicativa respecto de los seres humanos. Los ejemplos que hemos elegido son:

—los indios de la Cuenca y Mesetas (consistentes en varios grupos diferentes que son geográficamente cercanos y que comparten algunos rasgos lingüísticos y culturales pero explotan microambientes diferentes);

—los indios ojibwa septentrionales (que muestran significativos cambios a lo largo del tiempo en cuanto a su organización espacial y a las estrategias de subsistencia); y

—los karimojong de África Oriental (que ilustran el grado de complejidad en organización espacial que puede existir en una única población humana en un punto dado del tiempo).

Definimos un territorio como un área que un individuo o grupo ocupa de modo más o menos exclusivo mediante repulsión por defensa abierta o de alguna forma de comunicación (véase más adelante). Con frecuencia, el espacio personal y la territorialidad son tratados en forma superpuesta, pero en este artículo nos preocupamos por la segunda. En las discusiones acerca de la territorialidad humana con frecuencia también está implícito o explícito el problema de si los seres humanos son innatamente agresivos, pero no trataremos este aspecto de la controversia (véase el análisis de este tema en Wilson [1971] y Durham [1976]).

La teoría ecológica

Si bien la territorialidad humana ha sido tema importante de discusión durante algo más de una década, el estudio de la territorialidad animal en general (y de ejemplos de aves en particular) tiene una historia significativamente más larga. Existen algunas revisiones generales (Burt, 1943; Carpenter, 1958; Hinde, 1956; Klopfer, 1969; Tinbergen, 1957; Wilson, 1975), por lo que aquí no intentaremos ni una historia del concepto ni una enumeración de definiciones alternativas. En cambio, trataremos de mostrar cómo los enfoques ecológicos actuales del estudio de la organización espacial han dejado de prestar atención a antiguas interrogantes acerca de la territorialidad (¿es un área defendida o solo una mutua exclusión?, ¿es una tendencia innata o aprendida?) para enfocar, en cambio, los parámetros cruciales de la distribución de recursos y la defensa económica.

En la definición de qué es lo que constituye territorialidad, muchas discusiones han girado en torno de si debe subrayar la *defensa* de un área particular o el *uso exclusivo* de ella, sin tener en cuenta el modo en que se conserva la territorialidad. Para diferenciar entre territorialidad y casos en los que el uso exclusivo se deba solo a factores tales como recursos ampliamente dispersos o una densidad muy baja de individuos, elegimos adoptar la definición de Wilson (1975: 256): un territorio es "un área ocupada más o menos excluyentemente por un animal o grupo de animales mediante repulsión a través de defensa abierta o de advertencias".

Esta definición remarca el arraigo que tiene la territorialidad en el comportamiento, sin sobresubrayar un posible mecanismo de apartamiento (defensa agresiva) a expensas de otras posibilidades (por ejemplo: evitación mutua fundada sobre marcas olfativas o visuales).

Antes de seguir avanzando, debemos examinar algunos errores comunes. En primer lugar, es necesario advertir que la gran variabilidad exhibida por los animales en los aspectos de su organización territorial torna equívocas o invalida muchas generalizaciones. Esa variabilidad ha sido fuente de muchas discusiones y confusión en la literatura.

—La variabilidad puede observarse en categorías *estructurales* (o definicionales): por ejemplo, si los territorios son exclusivos o superpuestos, defendidos o no defendidos, geográficamente estables o algo móviles, estacionales o permanentes;

—La variabilidad es también visible en características *funcionales* de los territorios, que incluyen muchas pautas diferentes de uso de los recursos (los biólogos hablan de "territorios de alimentación", "territorios de apareamiento", "territorios de todo propósito", etcétera).

Una segunda gran fuente de error es concebir la territorialidad como un rasgo innato o específico de la especie. Esto puede ser válido respecto de algunas especies (a condición de poseer una noción adecuadamente refinada de "innato") pero es claramente errónea en cuanto a una larga serie de otras especies. El comportamiento territorial de ellas no solo puede aparecer y desaparecer de forma estacional (algo que ha sido advertido hace ya mucho tiempo); una población local puede también cambiar rápido hacia o desde un sistema territorial como respuesta directa a alteraciones no estacionales en la distribución de los recursos.

Tal variabilidad ha quedado documentada recientemente en cantidad de poblaciones. Por ejemplo: ante la introducción artificial de concentraciones de recursos, las pajaritas blancas de las nieves pasaron de alimentarse en bandadas nómadas a mostrar una territorialidad estricta (Zahavi, 1971). Los estudios sobre babuinos cinocéfalos en hábitats diversos por lo general hallaron un sistema no territorial [*home range*], pero recientes trabajos de campo sobre una población que habitaba un ámbito pantanoso rico en recursos reveló la existencia de territorios excluyentes y mutuamente defendidos (Hamilton *et al*., 1976). Estudios en curso acerca de varias especies de aves nectívoras han demostrado de modo convincente que los individuos asumen y abandonan la defensa de las fuentes de néctar como parte de una estrategia de elevación al máximo de la eficiencia energética (Wolf y Hainsworth, 1971; Gill y Wolf, 1975). La lección que dejan estos y otros estudios es que la territorialidad no puede ser vista de

forma provechosa como un movimiento innatamente fijado y homólogo que aparezca en multitud de especies.

Si bien cuando se analiza la organización espacial en los animales se debe prestar consideración adecuada a la variabilidad, la diversidad funcional y la flexibilidad, lo cual no significa que una teoría general de la territorialidad sea inalcanzable. Al quedar desacreditadas las concepciones etológicas más simples de la territorialidad, la construcción de modelos teóricos y la investigación empírica están siendo orientados por un modelo de costos vs. beneficios que focaliza la *posibilidad de defensa económica* (Brown, 1964).[2] Según este modelo, se debe esperar comportamiento territorial cuando los costos del uso y defensa excluyentes de un área sean superados por los beneficios producidos por esa pauta de utilización de los recursos. La posibilidad de defensa económica es determinada por la interacción de las distribuciones espaciales y temporales peculiares de los recursos cruciales con el comportamiento de aprovisionamiento y la defensa territorial.

Es necesario señalar que para construir modelos de defensa económica se puede emplear cantidad de medidas: el tiempo, la energía, la adecuación reproductiva o incluso la supervivencia. Cuando se trata de recursos alimenticios, el empleo de la cantidad de energía por unidad de tiempo para medir costos y beneficios puede ser para la mayoría de los propósitos tanto válido como factible, pero con otros tipos de recursos otras medidas podrían ser más adecuadas. Creemos que para llevar a la práctica y medir de modo empírico las tasas de defensa económica el criterio de la energía es decididamente superior al de la adecuación reproductiva.

Sin embargo, a nuestro razonamiento subyace la presunción de que la adaptación —sea genética o fenotípica— termina por aumentar el ajuste adaptativo, y que la tasa neta de ganancia energética tenderá a mostrar alta

2 Para que algo sea económico, debe reunir cantidad de condiciones: valores alternativos ordenados jerárquicamente, medios alternativos insuficientes, opción, etc. (D. G. Greenwood, com. pers.). Si bien algunos científicos sociales pueden creer que el uso de ese término en el contexto del comportamiento animal sería inapropiado, pensamos que las condiciones precedentemente enumeradas son satisfechas en efecto. En todo caso, la "posibilidad de defensa económica" es un término utilizado de forma amplia en la literatura ecológica acerca del comportamiento y tiene significado tan claro como para justificar su empleo en este contexto.

correlación con esta última medida (tal como se analiza en Smith, 1977). En otras palabras: el modelo aquí presentado supone que "la estrategia territorial que se desarrolle será la que eleve al máximo el incremento del ajuste adaptativo debido a la extracción de energía del área defendida, cuando se lo compara con la pérdida de ajuste adaptativo causada por el esfuerzo y los peligros de la defensa" (Wilson, 1975: 269).

La defensa económica tiene varios ingredientes que interactúan para producir una relación costos-beneficios. Los costos de la territorialidad incluyen:

1. El tiempo, la energía o el riesgo asociados con la defensa de un área;

2. La posible desviación de tiempo y de energía respecto de otras actividades necesarias;

3. Las posibles consecuencias negativas del hecho de depender para la obtención de recursos de un área que sea limitada en lo espacial.

Los beneficios de la territorialidad son simplemente los que resultan de tener acceso exclusivo a los recursos cruciales. Sin embargo, ese beneficio está condicionado por el precedente factor 3 y se relaciona con modos alternativos (no territoriales) de utilizar los recursos. Para todo caso de territorialidad, la relación entre beneficios y costos debe superar (quizá por margen amplio) a la igualdad. También es posible sostener que, a la larga, los procesos adaptativos tenderán a producir resultados óptimos y, por tanto, que la proporción beneficios/costos de un sistema territorial deberá tener un valor promedio mayor que las alternativas no territoriales a las que el individuo o el grupo tengan acceso. Sin embargo, esta última expectativa incluye la evaluación de un amplio rango de costos de oportunidad, y el modelo de defensa económica no basta para esa finalidad.

La proporción beneficios/costos de una estrategia territorial depende mucho de cuál sea la pauta de distribución de los recursos: es esta relación la que debe examinarse cuando se intenta dar cuenta de la presencia o ausencia de organización territorial en una población dada. Para nuestros fines, los parámetros importantes de la distribución de recursos son la predictibilidad de hallazgo y la abundancia. La primera tiene tanto un ingrediente espacial (la predicción de la ubicación) como un ingrediente temporal (la predicción

en el tiempo). La abundancia o densidad de un recurso puede medirse de varias maneras: en términos de densidad promedio sobre un área grande (el promedio del territorio o del ámbito residencial [*home range*]), como valor promedio dentro de una clase particular de microhábitat (densidad intra concentraciones) o dando cuenta de las fluctuaciones en densidad en el transcurso del tiempo (el rango de la variabilidad). Si bien todos esos parámetros de distribución de los recursos interactúan para determinar el valor adaptativo de cualquier estrategia de aprovisionamiento, en honor de la claridad consideraremos primero cada parámetro por separado en función del modelo general de la defensa económica.

Los recursos que son predecibles en cuanto a su distribución espacio-temporal tienen mayores posibilidades de defensa económica que los recursos no predecibles. Un hábitat en el que los recursos cruciales sean predecibles será más eficientemente explotado mediante un sistema territorial (a condición de que los parámetros de distribución de otros recursos permanezcan constantes). Los modelos geométricos del aprovisionamiento indican que, cuando los recursos alimenticios tienden hacia una distribución uniforme y son predecibles, resulta más eficiente (es decir, requiere menos tiempo o energía de búsqueda para obtener una cantidad dada de rendimiento) que los individuos se dispersen sobre áreas de aprovisionamiento mutuamente excluyentes (Horn, 1968; Smith, 1968). No poder predecir el hallazgo de los recursos conduce a que la defensa de los recursos controlados produzca beneficios menores; por debajo de cierto umbral, la territorialidad sería antieconómica o, inclusive, inviable (Brown, 1964).

Cuando la impredictibilidad de hallazgo de los recursos llega a cierto grado, se debe esperar que aparezca el agrupamiento de individuos (lo que en el caso de especies no humanas con frecuencia se denomina colonialismo). En esas situaciones, el uso eficiente de los recursos puede depender de que se acumulen informaciones acerca de la localización de concentraciones efímeras de ellos. Esa información puede ser compartida:

—Sea pasivamente, como en casos de observación y seguimiento de individuos exitosos (Horn, 1968; Ward y Zahavi, 1973);

> —Sea activamente, como en el caso de los chimpancés que hacen notar —mediante golpes como de tambor— los hallazgos de árboles frutales distribuidos en concentraciones que son pequeñas y asincrónicas (Reynolds y Reynolds, 1965: 423).

Como ilustración de cómo entre los primates se aplican algunos de esos principios, los folívoros arbóreos —por ejemplo, *Alouatta*, *Colobus* y *Presbytis*— habitualmente exhiben fuerte territorialidad, en contraste con las especies más frugívoras y omnívoras (Bates, 1970). Ese incremento en la frecuencia de la territorialidad ha sido atribuido en parte a la gran posibilidad de defensa de los recursos foliáceos, que en las regiones tropicales y subtropicales pueden ser muy predecibles (Brown y Orians, 1970; Denham, 1971; Crook, 1972; Eisenberg *et al*., 1972).

La abundancia o la densidad de recursos constituyen parámetros más relativos que la predictibilidad, y en cada caso particular deben relacionarse con la bioenergética del aprovisionamiento y el tamaño grupal. En nuestro modelo, la densidad de los recursos significa en realidad densidad *efectiva*, no abundancia absoluta (por tanto, un área dada puede contener una biomasa mayor de roedores pequeños que de animales grandes, pero es probable que un grupo humano capture estos últimos en cantidad mayor y con mayor eficiencia; para usar nuestras palabras, en este ejemplo, los animales grandes tendrían mayor densidad efectiva).

En general, el aumento en la densidad promedio de los recursos cruciales torna más económicamente defendible un sistema solo porque reduce el área que necesita ser defendida y, por tanto, disminuye los costos de defensa. Sin embargo, si se combina con un grado bajo de predictibilidad, la densidad de recursos *dentro de una concentración* reduce las ventajas económicas de la territorialidad. Es decir: de darse suficientes densidades intra concentración y poca posibilidad de predecir el hallazgo de concentraciones, se producen *superabundancias* localizadas y efímeras en las que la temporaria plétora de recursos supera a lo que es posible consumir; por tanto, hay más coparticipación (activa o pasiva) que defensa. Tal situación puede ser característica de recursos que son cruciales para diversas poblaciones: por ejemplo, las aves insectívoras (Horn, 1968; Emlen y Demong, 1975), las aves marinas coloniales

que aprovechan concentraciones densas y no predecibles de peces (Lack, 1968: 134) o los chimpancés que se alimentan en árboles frutales distribuidos en concentraciones aisladas (Eisenberg *et al*., 1972).

Sin ahondar más en las complejidades teóricas de casos específicos, es posible resumir esquemáticamente las relaciones formales entre los precedentemente analizados parámetros de la distribución de recursos y la posibilidad de defensa económica según diferentes estrategias de aprovisionamiento (Cuadro I; la Figura 1 proporciona una versión gráfica). Nótese que la predictibilidad del hallazgo de los recursos y su abundancia interactúan para determinar el valor adaptativo de diferentes pautas de uso de los recursos. En síntesis: cuando se dan condiciones de gran densidad y de posibilidad de predecir el hallazgo de los recursos cruciales, es más probable que aparezca un sistema territorial.

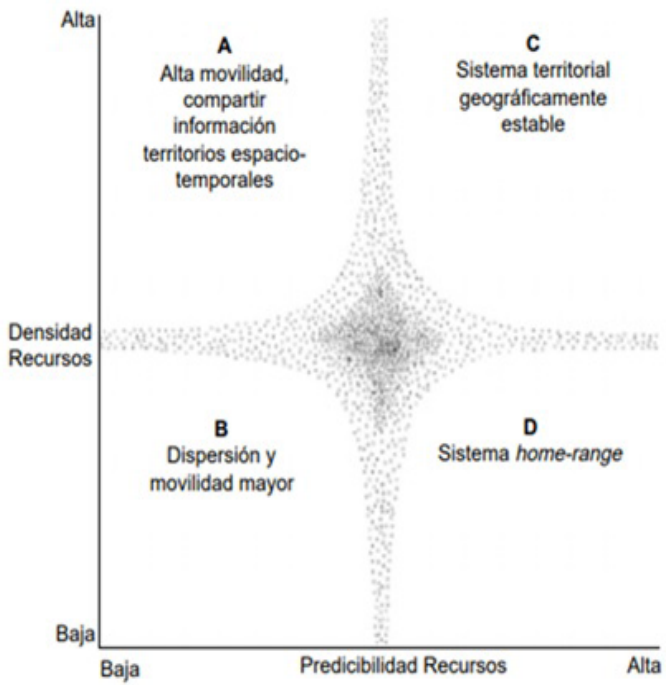
Sin embargo, es necesario señalar que si un recurso es tan abundante que su disponibilidad o tasa de captura no es limitante en forma alguna para una población, entonces no habrá beneficio que ganar con su defensa y no se debe esperar que aparezca territorialidad. Si los recursos son relativamente escasos pero todavía se puede predecir su hallazgo, se deben esperar grandes ámbitos residenciales con cierto grado de superposición. Si la predictibilidad del hallazgo de los recursos baja de cierto umbral, los lazos territoriales con un área fija dejan de ser económicamente defendibles y aumenta el grado en que se practican movimientos de aprovisionamiento sobre un área grande (nomadismo). Según cuál sea la densidad promedio de los recursos dentro de una concentración, los impredictibles serán más eficientemente explotados mediante compartición comunal de información (alta densidad promedio) o mediante gran cantidad de dispersión (baja densidad promedio).

Si bien esta suerte de correlación simplificada entre distribución de recursos y estrategias de aprovisionamiento no puede reflejar con exactitud la complejidad de casos específicos, pensamos que proporciona —de manera muy similar a otras muchas formulaciones alternativas— un marco general para explicar la aparición (o la no aparición) de territorialidad.

Cuadro 1. relaciones entre distribución de recursos y estrategias de aprovisionamiento

	Distribución de recursos	*Posibilidad de defensa económica*	*Utilización de los recursos*	*Grado de nomadismo*
A	No predecibles y densos	Baja	Copartición de información	Alto
B	No predecibles y escasos	Baja	Dispersión	Muy alto
C	Predecibles y densos	Alta	Territorialidad	Bajo
D	Predecibles y escasos	Relativa	Ámbitos residenciales (home-ranges)	Bajo a mediano

Figura 1. Predicciones generales del modelo de defensa económica respecto de la organización espacial.



En la siguiente sección someteremos a prueba la pertinencia del modelo de defensa económica para la comprensión del comportamiento humano territorial. El procedimiento ideal sería efectuar una revisión sistemática del comportamiento territorial en una muestra al azar de sociedades humanas. Sin embargo, la índole de los datos sobre territorialidad humana torna difícil concretar tal revisión sistemática. Los términos *territorio* y *territorialidad* tienden a ser aplicados a cazadores-recolectores y a pastores, en tanto lo que podría ser un comportamiento equivalente en agricultores suele ser descrito como sistemas de tenencia de la tierra. Aun cuando un grupo sea descrito como territorial, con frecuencia no se especifican la índole del grupo, los medios de defensa territorial ni la distribución y abundancia de los recursos. Por consiguiente, para someter

a prueba el modelo, hemos seleccionado dos estudios etnográficos de poblaciones localmente adaptadas que parecen proporcionar los datos necesarios para la comparación con los modelos animales, más los datos de una tercera población localmente adaptada para la que contamos con información detallada de primera mano.

La territorialidad humana: tres casos

También en las poblaciones humanas es posible ver la variación en la organización espacial en respuesta a variaciones en la distribución de los recursos que se encuentran en otras especies animales. Nuestro primer ejemplo, los indios de la Cuenca y Meseta, consiste en varios grupos diferentes que viven en proximidad geográfica entre sí y comparten ciertos rasgos lingüísticos y culturales pero explotan microambientes diferentes. Los indios ojibwa septentrionales están más unificados en los planos geográfico, cultural y ecológico, pero en su caso un detallado registro histórico muestra cambios importantes a lo largo del tiempo en cuanto a la organización espacial y a la estrategia de subsistencia. Luego de nuestro examen de esos casos de cazadores-recolectores, presentaremos un estudio más detallado de los karimojong de África Oriental que ilustrará el grado de complejidad en la organización espacial que puede existir en una única población humana en un momento dado.

Al aplicar los razonamientos deducidos de nuestro modelo general de defensa económica, examinaremos los datos de cada caso particular en determinada secuencia. En primer lugar, consideraremos la distribución de los recursos sobre el área en cuestión, delimitando tanto como sea posible la abundancia y el grado de predictibilidad del hallazgo de los recursos clave. Luego nos volcaremos hacia las pautas de utilización de los recursos que han quedado registrados para esa población particular (pautas de aprovisionamiento cooperativo, compartición de información, competitividad, etc.). Por último, examinaremos la organización espacial de la población, centrando el foco sobre el grado de dispersión, nomadismo y territorialidad. Nuestro objetivo es determinar si los parámetros de distribución de los recursos se relacionan del modo previsto por nuestro

modelo general con las pautas de utilización de esos recursos y con la organización espacial de cada caso.

Por tanto, nuestros ejemplos no constituyen una muestra representativa, pero fueron elegidos para ilustrar aspectos diversos de la territorialidad humana. Pensamos que de este modo podemos comenzar a someter a prueba en forma más amplia el modelo de defensa económica y sin embargo evitar la superficialidad que podría aparecer si en un artículo de esta longitud intentáramos una revisión general de la organización humana del espacio. En síntesis, nuestros tres ejemplos fueron elegidos para mostrar:

—La variación intergrupal en una única región (indios de la Cuenca y Meseta);

—La variación en el trancurso del tiempo (ojibwa septentrionales); y

—La variación intragrupal en un punto del tiempo (karimojong).

Los indígenas de la Cuenca y Meseta

En su clásico estudio sobre las poblaciones indígenas de la región de la Gran Cuenca de América del Norte, Steward (1938) describió grandes diferencias entre los distintos grupos en cuanto al grado de delimitación y defensa de sus territorios.[3] En el interior de la Gran Cuenca y de las vecinas mesetas del Colorado y del Columbia, Steward identificó cuatro grupos etnolingüísticos, de los que aquí nos interesan tres: los shoshones occidentales, los paiute meridionales y los shoshones septentrionales. Analizaremos los datos de Steward según el modelo de defensa económica, examinando primero los parámetros de abundancia y predictibilidad de los recursos y luego las pautas de distribución de recursos que aumentan al máximo u optimizan la eficiencia de su empleo.

3 Fundamos esta descripción sobre Steward (1938, 1955). Su modelo de la organización espacial en la Gran Cuenca ha sido tanto criticado (Service, 1971; 1975; Williams, 1974) como defendido (Thomas, 1972; 1973; 1974).

Los shoshones occidentales

En el área habitada por los shoshones occidentales (el centro de la Gran Cuenca), las lluvias son pocas y dispersas. La densidad de animales de caza y de la mayoría de los vegetales alimenticios era muy baja (Steward, 1938: 20, 33). En términos de predictibilidad, fue habitual sostener que en las regiones áridas los recursos vegetales y animales "comparten la muy importante característica de no ser posible predecir el lugar y la cantidad de su aparición un año tras otro, debido en gran medida a las variaciones en las precipitaciones" (Steward, 1955: 105). Debido a la muy baja productividad primaria, los animales de caza eran muy escasos y los de tamaño grande no vivían en manadas. Es probable que la caza menor — roedores, lagartos e insectos— haya contribuido más a la dieta que los mamíferos grandes (Steward, 1938: 33).

Los shoshones occidentales vivían primordialmente de alimentos vegetales: sobre todo semillas de gramíneas y piñones, pero también hojas, raíces y bayas. Las semillas de hierbas de las cuales dependían maduraban en forma secuencial, desde las tierras bajas hacia las altas, a medida que la temporada avanzaba desde la primavera hacia el verano y el otoño. Steward describió rasgos particulares de la distribución de semillas de la siguiente manera (1938: 19-20):

1. Algunas hierbas con semillas comestibles rara vez aparecen en concentraciones densas, por lo que las técnicas de recolección de los shoshones —a los que Steward consideró como razonablemente eficientes— no proporcionaban cantidades grandes;
2. Como en cada localidad el periodo de cosecha era corto, y como las semillas de la mayoría de las especies caen de la planta antes de pocos días o semanas desde que maduran, no se cosechaban muchas;
3. La ubicación de las concentraciones de vegetales de semilla no era predictible, pues la abundancia de las semillas guarda relación estrecha con la distribución de las lluvias.

Los piñones —que aparecen en el cinturón de pinos y juníperos entre los 1 500 y los 2 000 metros— constituían el principal alimento invernal

de los shoshones occidentales. Como este recurso constituía una importante contribución a la dieta, es importante examinar su distribución y abundancia. En palabras de Steward:

> Donde aparece, constituye la más importante especie alimenticia aisladamente considerada, pero las cosechas no pueden ser materia de predicción. Cada árbol produce solo una vez cada tres o cuatro años. En algunos años hay una buena cosecha en toda el área, en otros casi nada. En otros años, algunas localidades proporcionan piñones pero otras no. Cuando se produce una buena cosecha, es mucho más abundante que cuanto la población local puede cosechar El periodo durante el que (los piñones) pueden ser cosechados dura dos a tres semanas, rara vez más (Steward, 1938: 27).

Esas concentraciones locales y de corta duración pueden ser vistas como superabundancias temporarias.

Las pautas de uso de recursos y de organización espacial de los shoshones occidentales pueden analizarse como respuestas a las características propias de recursos específicos. La baja densidad promedio de los recursos se refleja en una densidad de población de aproximadamente 0.13 personas por km2 (Steward, 1938: 49).

La mayor parte de las cacerías eran llevadas a cabo por individuos solitarios, pero todo animal grande que fuera capturado se distribuía entre los agrupamientos de familias que compartían el campamento. La cacería cooperativa (ojeos de antílopes, cacerías de conejos con red) producían rendimientos *per capita* superiores a las cacerías solitarias, pero el efecto sobre las poblaciones animales locales así perseguidas era tan drástico que en cada localidad tales cacerías podían ser cumplidas solo de manera muy poco frecuente (Steward, 1938: 33, 231).

Las semillas de gramíneas eran recolectadas por unidades familiares en forma separada. Durante los meses en que las semillas de hierbas constituían el recurso alimenticio principal, la población se dispersaba mucho, pues la baja densidad de ese recurso hacía que agruparse para el aprovisionamiento resultara ineficiente. "La participación de muchas personas en la recolección de semillas y raíces no solo no aumentaba la cosecha *per capita*: por lo regular

la disminuía tanto que las familias individuales preferían recolectar solas para no tener que disputar con otras familias" (Steward, 1955: 107). Durante esos periodos, la población era también muy nómada, como respuesta ante la índole muy efímera e imprevisible del recurso principal.

En el otoño, los grupos recolectores familiares que estuvieran próximos a algún bosquecillo de piñones que estuviera produciendo cosecha podían confluir sobre él, recolectar tantos piñones como fuera posible y ocultarlos para almacenamiento invernal. Varias familias podían pasar el invierno juntas en pequeñas "aldeas" en la localización de esos escondrijos de piñones. La muy errática pauta de rendimientos reunía cada otoño a diferentes familias en diferentes lugares; la necesidad de pasar el invierno junto al escondrijo implicaba que en la época más sedentaria del año no podían amalgamar grupos coherentes de familias ni establecerse la propiedad familiar o de banda sobre los montecillos de piñones (Steward, 1938: 233).

Steward menciona varias veces (1938: 19, 27, 254, etc.) la cooperación entre familias mediante la copartición de información. Por tanto, las familias individuales se reunían con frecuencia en las ubicaciones donde había buenas cosechas de piñones, en parcelas de semillas maduras o en concentraciones de locústidos, o bien para organizar cacerías de conejos. Al parecer, este método desempeñaba papel importante en distribuir la población respecto de concentraciones locales y efímeras de recursos, si bien Steward no analizó este tema con detalles cuantitativos.

Si volvemos al modelo general antes propuesto, podemos ubicar a los shoshones occidentales, durante la porción del año en que focalizaban la recolección de alimentos silvestres, en el cuadrante B de la Figura 1. Dado que los recursos son escasos y no predecibles, la respuesta más económica era la dispersión y el nomadismo (en este caso, en el nivel de familias). Los piñones —el principal recurso de los meses invernales— son efímeros y no predecibles, pero localmente densos (con superabundancias temporarias), por lo que las pautas previsibles de utilización incluyen nomadismo, dispersión reducida y copartición en alto grado de información (cuadrante A). Sin embargo, el factor almacenamiento implica que, una vez cosechados,

los piñones quedaban confiablemente disponibles, lo que conducía a un lapso sedentario dentro del ciclo anual.

En síntesis: los shoshones occidentales exhibían cambios en sus grados de nomadismo y dispersión que eran en general coherentes con nuestro modelo. Sostenemos que en su caso, debido a la distribución de los recursos críticos, la territorialidad resultaba una opción que no era defendible en el plano económico. El resumen hecho por Steward de los datos que él recogió presta claro apoyo a esta argumentación:

> Los shoshones carecen de toda forma de propiedad de la tierra o de los recursos que existan sobre ella (salvo los nidos de águilas). Para cazar, pescar o recolectar semillas, ningún grupo utilizaba habitual o exclusivamente territorios definidos con claridad. La aparición dispersa y errática de alimentos vegetales requería que los territorios explotados por diferentes familias y aldeas no solo variara de año en año, sino también que se superpusieron de forma considerable. Bajo tales condiciones, la propiedad de los recursos alimenticios vegetales habría constituido para toda una desventaja (Steward, 1938: 254).

Los paiute

En contraste con los shoshones occidentales, los paiute del valle Owens vivían en un área más pequeña pero mucho más productiva, ubicada en el borde de la Gran Cuenca (el valle Owens está formado por la escarpa oriental de la Sierra Nevada y, hacia el oeste, por las cadenas de montañas Inyo y White). Debido a la topografía abrupta, el ambiente local muestra considerable zonación y diversificación de recursos, de modo que todos los alimentos necesarios podían obtenerse dentro de un radio de 32 km desde cada asentamiento (Steward, 1938: 50). Esa zonificación reducía las áreas de aprovisionamiento y, por tanto, aumentaba la densidad efectiva.

Además, los cursos de agua que fluyen desde las sierras constituyen una provisión de agua mayor que la existente en el área de los shoshones occidentales. Es de presumir que tal provisión de agua —derivada de ríos

alimentados por la fusión de nieve y por acuíferos— haya conducido a la aparición de recursos más abundantes y de hallazgo más predecible que en regiones donde el crecimiento vegetal depende solo de lluvias en parches. Los habitantes del valle Owens aumentaron la densidad y predictibilidad de los recursos mediante el regadío sistemático de parcelas donde crecían semillas silvestres (Steward, 1938: 53). La mayor densidad de recursos en el valle Owens está atestiguada por la densidad de la población humana: cerca de 1.25 personas/km^2, o sea unas diez veces la densidad promedio de los shoshones occidentales.

Las pautas de uso de los recursos incluían cacerías comunales, redistribución de la carne dentro de la banda local y recolección habitualmente familiar de alimentos vegetales. Sin embargo, los paiute del valle Owens —quizá los únicos entre los indígenas de la Gran Cuenca— vivían a todo lo largo del año en aldeas permanentes, cercanas a afluentes del río Owens. Había grupos de aldeas organizadas en bandas bien definidas que delimitaban y defendían territorios. Los territorios de banda eran secciones transversales del valle, que lo cruzaban y se extendían hasta los flancos de las montañas. En caso necesario, los territorios eran defendidos mediante agresiones en pequeña escala (el registro es de poco derramamiento de sangre), pero principalmente mediante sanciones sociales y sobrenaturales.

El acceso a los recursos dependía de la pertenencia a la banda, pero en ocasiones lograban beneficiarse individuos ajenos al grupo. Las áreas de piñones ubicadas dentro del territorio de una banda se subdividían en parcelas familiares. Según Steward (1938: 52), las familias defendían sus parcelas de piñones contra las transgresiones, pero "a menudo invitaban a personas de otras bandas —en especial a sus parientes— a recolectar en sus parcelas". Las cosechas de piñones eran organizadas por los jefes de cada banda.

Steward mencionó territorios de cacería poseídos por la banda, pero dejó claro que esa organización territorial era mucho más flexible que en el caso de los recursos vegetales. Las dos especies que podían ser cazadas por ojeo (antílopes y conejos) eran capturadas cooperativamente dentro de los territorios de banda; los cazadores actuaban bajo la dirección de un conductor de la cacería y la participación se limitaba por lo regular a los integrantes de

esa banda (Steward, 1938: 53). Sin embargo, no toda la caza la efectuaban los integrantes de cada banda dentro de su propio territorio: algunas cacerías de ciervos incluían la participación de varias bandas.

En la porción meridional del valle Owens, las bandas no pretendían derechos sobre territorios de caza: "Se permitía que los varones cazaran en todas partes, si bien tendían naturalmente a restringir las cacerías a las montañas próximas a sus respectivas aldeas [...] y la propiedad de los territorios de caza parece desvanecerse gradualmente desde el norte hasta el sur del valle Owens" (Steward, 1938: 54). El hecho de que los paiute del valle Owens fueran menos territoriales respecto de la caza que en lo que hace a los recursos vegetales puede explicarse porque los animales de caza constituyen un recurso muy móvil: por consiguiente, su aprovechamiento es menos predecible que el de los alimentos vegetales.

En síntesis: los recursos del valle Owens tienen mayor densidad y predictibilidad que los vistos en relación con los shoshones occidentales; esto hizo que para la población cazadora-recolectora ese valle resultara defendible económicamente. Si bien la exclusividad territorial condujo a que se redujera la eficiencia con que se obtenían algunas clases de recursos, al parecer permitió un aumento en la tasa individual de rendimiento promedio del tiempo y la energía dedicados al aprovisionamiento: "Los efectos perturbadores del rendimiento errático de las semillas silvestres —en especial los piñones— se compensaron por la importancia de las parcelas de semillas del valle, regadas comunalmente y, por tanto, relativamente confiables" (Steward, 1938: 256).

Los shoshones septentrionales

Los shoshones septentrionales constituyeron un tercer grupo de indígenas de la Cuenca y Mesetas estudiado por Steward. Aquí trataremos solamente los grupos que vivían en el borde nororiental de la Gran Cuenca, en un área con lluvias algo mayores y más alta productividad primaria.

Es de presumir que en el norte de la Gran Cuenca —donde la lluvia es más abundante— recursos vegetales tales como las semillas de gramíneas

serían más predecibles y menos dispersos en manchones que en el sur de la Gran Cuenca, donde las lluvias son más escasas.[4]. Sin embargo, Steward no analizó en directo el problema de la distribución de los alimentos vegetales. Señaló en cambio que el pastoreo en esa área era suficiente para criar caballos —en tanto algunos caballos que se extraviaron en el área de los shoshones occidentales fueron muertos y comidos porque competían con los seres humanos por los recursos alimenticios (Steward, 1938: 235)—. Los shoshones septentrionales usaban los caballos para extraer una importante porción de su subsistencia de las cacerías de bisontes: si bien las manadas de estos últimos tenían predictibilidad espacial relativamente baja, cuando se las encontraba constituían un recurso muy concentrado. Sostenemos que la cantidad de recursos disponibles se vio aumentada por el empleo de caballos para la búsqueda, persecución y transporte de los recursos: en especial bisontes, pero también alimentos vegetales.

La pauta de uso de los recursos por los shoshones septentrionales incluía una secuencia estacional de estrategias de subsistencia: en verano, cacerías de bisontes; en otoño, recolección de raíces y bayas más caza; en invierno, vida primordialmente dependiente de los excedentes de carne de bisonte. Las cacerías de bisontes incluían la formación de grandes bandas y la migración por sobre los pasos bajos de las Montañas Rocosas hasta las Grandes Llanuras; según Steward (1938: 235), las cacerías cooperativas de bisontes eran una actividad de gran rendimiento, fundamental para la subsistencia de los shoshones septentrionales:

> Las manadas al este de las Montañas Rocosas eran tan grandes, que varios centenares de personas podían no solamente sustentarse a sí mismas durante la cacería, sino también curar carne suficiente como para que alcanzara para gran parte del año. Las cacerías eran cooperativas porque [...] el rendimiento de un ojeo planificado y concertado era mucho mayor que cuanto los individuos podían lograr aisladamente.

4 Se sabe que, como norma meteorológica general, la discontinuidad espacial de la lluvia aumenta a medida que disminuye el promedio total de precipitaciones anuales.

Esos grandes grupos migratorios de cazadores eran también eficientes en la defensa contra incursiones de otros cazadores ecuestres.

Al retorno de las cacerías en las llanuras sucedía la dispersión en familias individuales o en grupos chicos, con el fin de aprovechar los recursos locales antes de que comenzara el invierno. Luego, las familias se amalgamaban en aldeas invernales, en grupos que tenían aproximadamente el mismo tamaño y similar composición que las partidas de caza estivales.

Es indudable que los caballos resultaban cruciales para proporcionar alimento recolectable sobre una gran área y transportarlo hacia el centro, lo cual sustentaba a grandes grupos locales. Los grandes agregamientos de gente no indican alta densidad general de recursos: la densidad de población era baja (2.1 a 0.08 personas/ km^2), pese al hecho de que gran parte de la alimentación (los bisontes) era "importada" desde otro hábitat.

La organización espacial de los shoshones septentrionales incluía durante parte del año alta movilidad con agregamiento, durante otra parte movilidad con dispersión, y durante el invierno un agregamiento bastante sedentario. Como las diferentes pautas estacionales de subsistencia tenían lugar en dos regiones geográficamente separadas y focalizaban recursos muy disímiles, no podemos esperar que en las dos zonas la organización espacial de los shoshones haya sido igual.

Según Steward (1938: 237), las áreas usadas por los grupos shoshones septentrionales se superponían, y en ninguna época del año había territorialidad.[5] Es indudable que esto sería esperable para la fase veraniega, pues perseguir a caballo animales de manada muy móviles es incompatible con la defensa de territorios. Durante la dispersión de los otoños, la gente parece haber focalizado la obtención de alimentos típicos de la Gran Cuenca en general, espacialmente dispersos en pequeñas concentraciones

5 En contraste, Service (1971: 86) atribuyó territorialidad a los shoshones septentrionales, afirmando que los grupos montados "monopolizaban las áreas más fértiles como pasturas para sus caballos. Eran muy dominantes sobre los otros indios, a los que dispersaban considerablemente en unidades pequeñas y a los que negaban acceso a los sitios de pesca y a las áreas buenas para cacería y recolección". Sin embargo, no presentó pruebas para ese punto de vista.

y efímeros en lo temporal (Steward, 1938: 235), por lo que de nuevo la territorialidad no sería previsible.

Steward indicó que otros grupos efectuaban incursiones contra los shoshones septentrionales, pero no especificó en qué épocas del año. Por tanto, no está claro si las aldeas invernales debían de ser defendidas contra extranjeros. Parecería que los aldeanos subsistían primordialmente a expensas de sus escondrijos, sin depender de recursos obtenidos en los alrededores de sus asentamientos. No obstante, los excedentes de comida, caballos y bienes —por ejemplo, pieles conservadas en las aldeas invernales— habrían sido objetos capturables y económicamente defendibles. Nuestra predicción es que grandes áreas de recursos como las mencionadas no habrían estado delimitadas ni defendidas, pero que las aldeas invernales lo habrían estado. Sin embargo, para someter a prueba nuestro modelo de forma adecuada, necesitamos más datos tanto sobre el empleo de los recursos como sobre la organización espacial en esa época del año.

Los ojibwa septentrionales

El análisis de la territorialidad entre los algonquinos del norte (incluyendo a los ojibwa septentrionales) tiene larga historia en antropología, y han sido frecuentes las discusiones tanto teóricas como empíricas. En relación con los orígenes de los territorios de caza de los algonquinos del norte, hay básicamente dos puntos de vista opuestos: algunos estudiosos, comenzando con Speck (1915; 1923; Speck y Eiseley, 1939; Cooper, 1939; Hallowell, 1949), sostuvieron que el sistema de cacería territorial fue una adaptación aborigen para aumentar los rendimientos sostenidos de los animales de caza (en especial los castores). Otros (Leacock, 1954; Knight, 1965; Bishop, 1970; 1974) han presentado indicios de que la territorialidad no habría sido aborigen entre los algonquinos del norte y que en realidad surgió después de quedar establecido el comercio de pieles.

Si bien este último punto de vista es ahora aceptado en general, todavía surgen discusiones en cuanto a qué factores habrían sido los principales determinantes del cambio hacia los sistemas territoriales de uso de la

tierra. Leacock remarcó el papel cumplido por la transculturación y la economía de trueque para alentar el paso desde la cacería de grupos cooperativos hacia el trampeo individual, y sugirió que los territorios familiares pudieron ser resultado de competición por animales cuyas pieles eran entregadas a cambio de comida. Knight lo contradice al señalar que los cree de la bahía East James pasaron más de doscientos cincuenta años en contacto con comerciantes y participando en la economía como tramperos sin desarrollar sistemas territoriales de tenencia de la tierra. Contrario a Leacock, Knight (1965: 36) sostiene que las poblaciones de animales peleteros fluctúan drásticamente (como otras muchas especies de animales subárticos) y que para evaluar la viabilidad de un sistema territorial es necesario tener también en cuenta las fluctuaciones de la economía de intercambio (cambios en los precios, disponibilidad de créditos, localización de puestos de comercio, etc.). Según el punto de vista de Knight (1965: 29):

> … hasta que la banda pudo disponer de alguna cantidad estable y significativa de ingresos que no provinieran de la cacería y el trampeo, las condiciones mínimas a largo plazo no habrían permitido a los cazadores-tramperos subárticos sobrevivir en caso de haber subdividido las áreas de banda generales en tramos permanentemente delimitados y entregados al uso exclusivo por familias particulares.

Respecto de la organización espacial de los ojibwa septentrionales, Bishop (1970; 1974) llegó a conclusiones que no concuerdan con los puntos de vista ni de Knight ni de Leacock. Sostuvo que los grupos ojibwa septentrionales pudieron haber adoptado sistemas territoriales de tenencia de la tierra no como respuesta a la economía de trueque individual ni en el contexto de dependencia respecto de alimentos almacenados, sino primordialmente cuando —entre otros factores— el agotamiento de animales grandes obligó a un giro hacia la cacería de especies chicas no migratorias.

Como base para nuestro análisis de los cambios en la territorialidad de los ojibwa septentrionales, usaremos las obras de Bishop (1970; 1974) en razón de la profundidad histórica de su relato y de su detallado registro de

cambios producidos en el transcurrir del tiempo. Sin embargo, como por lo general ocurre con las reconstrucciones etnohistóricas, mucha información está ausente o incompleta en la narración de Bishop. Por ejemplo: contiene poca información acerca de densidad de recursos, de la escala de los movimientos de la caza mayor, o de los ciclos de fluctuación en la cantidad de caza menor. Tampoco definió claramente la territorialidad ni fue específico acerca de qué grupo estaba asociado con un pedazo particular de tierra o sobre cómo se defendían los derechos territoriales. Sin embargo, la información que Bishop presentó en cuanto a cambios en la organización espacial de los ojibwa septentrionales y su relación con cambios en el uso de recursos parece satisfacer las predicciones derivadas de nuestro modelo.

Los ojibwa septentrionales eran originalmente cazadores-recolectores que vivían en Canadá, al este del Lago Superior. Durante los últimos cuatrocientos años expandieron su rango hacia el norte y el oeste, y modificaron sus pautas de subsistencia a consecuencia de ese movimiento y de contactos con los europeos (Bishop, 1974: 332). Con anterioridad a esos contactos, sus recursos incluían alces, ciervos de Virginia, caribúes de bosque, castores, varias especies de peces y amplia variedad de productos vegetales. Sin embargo, dependían sobre todo de dos especies de animales grandes: caribúes y alces.

En los siglos XVII y XVIII quedó establecido el comercio de pieles a cambio de objetos de manufactura europea y, más tarde, de alimentos. Esto ocurrió primero por medio de comerciantes itinerantes, y luego de puestos de comercio estables. Durante unos trescientos años, los ojibwa cambiaron desde la dependencia respecto de alimentos silvestres hacia una dependencia primaria respecto de los alimentos que obtenían en los puestos comerciales a cambio de pieles. Sin embargo, hasta hace poco la subsistencia de los ojibwa dependió en esencia —de modo directo o indirecto— de los animales que cazaban o trampeaban. En tiempos recientes, los ojibwa septentrionales han llegado a depender cada vez más de dinero ganado mediante ocupaciones nuevas (tales como trabajo en minas o como guías de pesca) o proporcionado por el Gobierno canadiense. En la actualidad, casi la mitad de los ingresos del grupo estudiado por Bishop

provenía de fuentes gubernamentales; el trampeo contribuía poco a su subsistencia.

Entre 1730 y 1780, los bienes de comercio reemplazaron de forma creciente a la tecnología aborigen, siendo esos bienes relativamente baratos y fáciles de adquirir. El trampeo de animales de piel fina, si bien importante para el comercio, no interfería con la cacería y recolección de alimentos por los ojibwa septentrionales, ni los ojibwa dependían del comercio para obtener su comida.

En el periodo comprendido entre 1780 y 1820 hubo gran competencia entre compañías comerciales rivales, lo cual produjo que se instalaran muchos puestos comerciales y se dispusiera de bienes de comercio baratos. En esa época, la fuente primordial de alimentos para los ojibwa septentrionales era la caza mayor, en tanto el trampeo era oportunista e implicaba gran movilidad. La dependencia respecto de animales móviles como los caribúes favorecía una "existencia más nómada que mitigaba la formación de territorios bien definidos, pues las migraciones de los caribúes no se restringen a regiones delimitadas artificialmente" (Bishop, 1974: 209).

Bishop (1974: 289-292) halló que entre los ojibwa de la región de Osnaburgh no existía durante ese periodo la propiedad territorial. El grupo de cazadores retornaba a una misma área general todos los años, pero no poseía derechos exclusivos sobre los recursos. Los límites entre las áreas usadas por diferentes grupos de cacería no estaban demarcados de modo preciso. Durante ese periodo, cuando abundaba la caza mayor, los miembros de cada banda particular "tendían a cazar todos los años en una misma región genérica, pero los recursos pertenecían a quien llegaba primero, aun cuando estuvieran dentro de la región habitada por otra banda" (Bishop, 1970: 11).

Hacia 1820, en el área estudiada por Bishop se agotó la caza mayor. A causa de establecerse en 1821 el monopolio comercial de la Compañía de la Bahía de Hudson, declinó el valor que se podía obtener por las pieles. Así, al mismo tiempo que los ojibwa septentrionales se tornaban más dependientes de los puestos comerciales para obtener alimentos y otros bienes, disminuyó el valor de las pieles que entregaban a cambio. La consecuencia fue

que se intensificó la competición por los animales peleteros. Al disminuir la caza mayor en el área de los ojibwa septentrionales, la subsistencia pasó a depender primordialmente de la caza menor no migratoria: en especial liebres y peces (Bishop, 1970: 12; 1974: 209).

Luego de la desaparición de la caza mayor y del cambio hacia el consumo de liebres y peces, los archivos estudiados por Bishop relativos a esa área documentan una reducción en el grado de movilidad y en la extensión areal que cubrían los cazadores ojibwa (Bishop, 1974: 209-210). Hacia mediados del siglo XIX, grupos ojibwa septentrionales que dependían del comercio de pieles y de la caza mayor habían establecido territorios de cacería familiares sobre la mayor parte del norte de Ontario (Bishop, 1974: 94). Al parecer, un aspecto importante de la defensa de los territorios de caza estuvo constituido por las sanciones sociales contra las transgresiones (Bishop, 1974: 218-219). Bishop concluyó (1970: 13):

> … el cambio hacia la caza menor, junto con el aumento de la población en un área que había sido drásticamente vaciada de los necesarios animales peleteros, [fue] lo que condujo al surgimiento de territorios de caza en el norte de Ontario. En el caso de los ojibwa septentrionales, la pérdida de la caza mayor (caribúes y alces) y la forzada dependencia respecto de liebres y peces constituyeron los factores cruciales para que se desarrollaran territorios familiares de caza.

La dependencia de los ojibwa respecto de los puestos comerciales siguió aumentando entre 1890 y 1945. Datos de archivo indican que en el área estudiada por Bishop se produjo durante la primera década del siglo XX una declinación en la rigidez del sistema territorial: en esa época, "las normas contra las transgresiones quedaron laxas", cambio "promovido por el retorno de la caza mayor, caribúes y alces", animales "no confinados por territorios delimitados artificialmente" (Bishop, 1974: 94). Bishop sugirió que el crecimiento de la población y el aumento de la competencia por las pieles pudo conducir a un derrumbe de las sanciones sociales contra las transgresiones y la caza furtiva, lo que contribuyó a la declinación de la territorialidad.

En la actualidad, los ojibwa de Osnaburgh viven en una aldea; la mayor parte de sus ingresos proviene más de su trabajo como jornaleros y de la ayuda gubernamental que del trampeo y el comercio. Los tramperos indios ahora pueden alquilar aviones para viajar a sus territorios de trampeo (Bishop, 1974: 15). También, la mayoría de formas de trabajo a jornal ha separado a los varones de sus familias y su comunidad; las escuelas establecidas por el Gobierno interfieren con los modos tradicionales de subsistencia. Bishop no analizó la pauta moderna de organización territorial ojibwa, pero es indudable que la posibilidad de defensa económica de un área particular sea influida tanto por la distribución y abundancia de los recursos como por factores tales como las regulaciones gubernamentales, la compulsión de las leyes y la creciente movilidad con cambiante tecnología.

Los datos presentados por Bishop acerca de la evolución de la territorialidad entre los ojibwa septentrionales parecen estar de acuerdo con las predicciones de nuestro modelo:

—La caza mayor (por ejemplo, los caribúes y los alces) es muy móvil y por tanto relativamente poco predecible en cuanto a su hallazgo en el espacio y en el tiempo. Cuando dependían de esos animales como recurso importante, los ojibwa septentrionales no defendían territorios (si bien el grado de nomadismo y dispersión de los grupos de cacería de los ojibwa no está bien documentado en relación con esa época).

—Luego de la virtual desaparición de la caza mayor, los ojibwa septentrionales se vieron obligados a que su subsistencia dependiera de especies de caza menor. Es poco probable que esto haya proporcionado una base de subsistencia tan abundante como la caza mayor, pero la caza menor es menos móvil, por lo que su hallazgo en el espacio es más predecible; la consecuencia es que los ojibwa comenzaron a defender territorios de caza.

Como lo indica nuestro modelo, la defensa económica de un área de recursos puede evolucionar aun cuando decline la abundancia de los recursos, si esa declinación está compensada por una mayor predictibilidad de los recursos-clave.

Los karimojong

En los casos de los indígenas de la Cuenca y Mesetas y de los ojibwa, el comportamiento territorial ocurría bajo condiciones ecológicas similares a aquellas en las que en otras especies aparece la territorialidad. Sin embargo, caracterizar el comportamiento de un grupo particular como "territorial" o "no territorial" puede ocultar a veces importantes aspectos de su organización social. Un grupo humano particular puede describirse como territorial o como no territorial según cuál sea el recurso que está siendo considerado. Incluso grupos humanos con economías de subsistencia utilizan en momentos dados enorme variedad de recursos y usan diversas fuentes de alimento, cada una de las cuales puede diferir en cuanto a características tales como predictibilidad de hallazgo, abundancia, movilidad y posibilidad de defensa. Los grupos humanos también utilizan recursos no alimenticios, como arcilla para alfarería, minas de sal, mineral de hierro para confeccionar utensilios, o madera para construir o quemar. Además, la gente ha manufacturado recursos tales como casas, utensilios, obras de regadío y corrales para ganado.

Ante esa enorme diversidad, no es sorprendente que dentro de una misma población humana algunos recursos puedan no ser defendidos, en tanto otros sean defendidos de diversas maneras. Por ejemplo: las cosechas pueden defenderse mediante la propiedad excluyente de un trozo particular de tierra, el ganado puede ser defendido a medida que se desplaza a través del espacio, en tanto los yacimientos de arcilla para alfarería pueden no ser defendidos en absoluto. Además, si un recurso es cuidado mediante la defensa de un territorio, el tamaño de ese territorio y la gente que sea excluida de él pueden variar según cuál sea el recurso en consideración. Estos puntos serán ilustrados mediante el análisis de la organización espacial de los karimojong, habitantes de Uganda nororiental (más detalles sobre sus estrategias de subsistencia y su organización social pueden consultarse en Dyson-Hudson [1966] y Dyson-Hudson y Dyson-Hudson [1969; 1970]). Si bien los karimojong poseen gran variedad de recursos que cubren desde las fuentes de agua hasta el adorno personal, nos enfocaremos en los recursos que se asocian con las dos diferentes estrategias

de subsistencia que proporcionan las fuentes principales de energía alimenticia: los vegetales cultivados (en particular el sorgo) y el ganado (en especial el vacuno).

El aprovechamiento del sorgo es espacialmente predictible porque crece donde se le siembra, en campos sobre las terrazas aluviales a lo largo de las porciones centrales de los grandes ríos; lo es también en cuanto al tiempo, porque el grano madura de cuatro a cinco meses después de haber sido sembrado. Si bien el rendimiento varía mucho, desde menos de 45 hasta más de 185 kg por hectárea, el cultivo de sorgo constituye claramente un recurso denso y predecible. Luego de la cosecha, el sorgo es almacenado en graneros dentro de poblados cercados que están en la proximidad de los campos; el sorgo almacenado también constituye un recurso denso cuya utilización es predecible en tiempo, espacio y cantidad. Si el sorgo cosechado es suficiente para abastecerlos de alimento, las mujeres, los niños de poca edad y los ancianos permanecen en los poblados a todo lo largo del año, siendo su alimento principal el sorgo almacenado en esos poblados.

Tanto el sorgo en crecimiento como el almacenado son recursos defendidos por las mujeres que cultivan el grano, con ayuda de sus parientes cercanos. La tierra buena para cultivar sorgo es limitada en cantidad, y es poseída de forma colectiva por los habitantes del grupo de poblados próximos. Se adjudican áreas específicas a mujeres individuales; la mujer y su marido —apoyados en caso necesario por otros miembros de la agrupación de poblados— impiden que otra gente cultive esa tierra. Los cultivos son defendidos contra el ganado levantando empalizadas y conservando las manadas bajo observación continua. Durante el periodo crucial en que el grano está madurando, la cultivadora y su familia se turnan en ocupar plataformas sobre el campo, desde la aurora hasta el atardecer, para defender las cosechas contra las aves y contra otra gente que pueda cortar y robar las suculentas espigas.

El grano cosechado se conserva en graneros de propiedad individual dentro de la empalizada que rodea al poblado, en el que viven diez o más mujeres con sus parientes próximos. Cada mujer protege su propio grano contra plagas de animales, entre ellos roedores, termitas y arañas. Se

impide el robo por otras personas conservando una guardia en el poblado o recurriendo a medios rituales; con frecuencia, los guardias son ancianos físicamente enfermos, y el ritual incluye colocar ramas de un árbol sagrado en cada entrada al poblado para que asegure que el infortunio recaerá sobre todo ladrón.

Un diario de trabajo de un poblado karimojong muestra claramente que defender las cosechas contra competidores animales —cercar campos, vigilar el ganado, gritar y arrojar pelotitas de barro a las aves que tratan de robar el grano en maduración, extender el sorgo al sol para matar los insectos— requiere actividades que exigen a la gente grandes gastos de energía (Dyson-Hudson, 1972). La defensa de las cosechas contra otros karimojongs incluye primordialmente requerimientos sociales e implica muy bajos costos de energía.

En síntesis: la densidad y la predictibilidad en tiempo y espacio son altos para el sorgo en crecimiento y para el grano cosechado: ambos son recursos que se defienden. La defensa de los cultivos contra competidores animales exige grandes cantidades de tiempo y energía. La energía dedicada a defender esos recursos contra otros individuos karimojong es relativamente poca, debido a la efectividad de los controles sociales. El control del acceso a la tierra de cultivo se efectúa más mediante exclusión social que lucha abierta, y son raras las discusiones sobre el uso de esa tierra de cultivo. También el grano cosechado se defiende primordialmente a través del miedo a la desaprobación social y a la intervención divina. La disponibilidad de un recurso denso y predictible significa que la gente que depende de ese recurso no es muy móvil.

La distribución, abundancia y predictibilidad del recurso constituido por el complejo cosechas + tierras de cultivo difieren mucho de las que se vinculan con el recurso ganado vacuno + tierras para apacentamiento. El ganado, que convierte el pastoreo en alimento humano, puede considerarse como predecible en tiempo y espacio, pues los pastores permanecen asociados con su ganado y se mueven junto con él. El ganado también puede considerarse un recurso abundante, pues el tamaño de los hatos se ajusta para que todos los pastores que cuidan de cada uno puedan subsistir con

el alimento que produce mediante la leche y la extracción de sangre de los animales vivos. El ganado es un recurso defendido, tal como es previsible según nuestro modelo: lo es contra enemigos y depredadores vigilándolo durante el día (con lanzas y escudos en caso necesario) y encerrándolo en corrales durante la noche. Sin embargo, defender el ganado no implica delimitar y defender territorios particulares, salvo en la medida en que los corrales puedan considerarse territorios. La distribución y la abundancia del ganado de los karimojong se relacionan con la disponibilidad de tierras de pastoreo. Las pautas de distribución y predictibilidad de las tierras de pastoreo son complejas; analizaremos con más detalle su relación con la organización social de los karimojong.

En Karamoja, la tierra de pastoreo es muy abundante y extensa. Salvo quizá 500 km^2 ocupados por montañas, virtualmente todo el resto de los 6 437 km^2 de tierra tribal de los karimojong puede usarse en algún momento para pastoreo. Sin embargo, la adecuación de un área particular para el pastoreo de ganado en un momento dado depende tanto de las condiciones de la vegetación como de la existencia de alguna fuente confiable de agua a menos de una veintena de kilómetros (pues el ganado de los karimojong debe beber prácticamente todos los días). Durante la estación lluviosa hay abundancia de agua y pastos en casi toda el área tribal; en cambio, durante la estación seca las áreas de pastos ubicadas a menos de veinte kilómetros del agua son discontinuas y no predecibles en cuanto al tiempo, el espacio y su duración. Durante la estación seca, tormentas localizadas e impredecibles producen muy nutritivos impulsos de crecimiento de la vegetación.

La cantidad de tiempo disponible para pastoreo en un área particular depende de la cantidad de humedad que exista en el suelo y del número de vacunos que pastoreen en esa área; el ganado se cambia de lugar para aprovechar las áreas que temporariamente tengan abundancia de pastos. Los pastores construyen campamentos temporales donde el ganado puede ser protegido durante la noche contra depredadores y enemigos humanos. En comparación con las mujeres y los ancianos (que viven primordialmente en poblados permanentes y comen sobre todo grano), los varones adultos y muchachos pastores asociados con el ganado vacuno tienen un modo de

vida más móvil, en respuesta a la poca predictibilidad en tiempo, espacio y rendimiento del pastoreo durante la estación seca. Además, los pastores están más dispersos debido a la relativamente baja densidad de recursos vegetales y a que la cadena alimenticia relacionada con la obtención de alimento del ganado es más larga que cuando se recibe directo de las plantas.

Los karimojong no defienden en forma individual terrenos de pastoreo específicos. Existe cierta tendencia a que los integrantes de un grupo de poblados utilicen durante la estación seca los pozos de agua más cercanos a sus asentamientos permanentes. Asimismo, un propietario individual de ganado suele tender a que su ganado paste en sucesivas estaciones secas en una misma área general, acaso porque así consigue un conocimiento más completo del ambiente. Sin embargo, no hay propiedad privada de terrenos de pastoreo: todos los karimojong tienen derecho a utilizar los pastos dondequiera que los encuentren dentro del área tribal.

Debido a la índole discontinua e impredecible de los recursos, así como también a la pauta individualizada de los movimientos de los hatos, la propiedad territorial de áreas fijas de pastoreo no constituye una estrategia viable. No obstante, en algunos puntos del espacio es posible regular mediante interacciones sociales la cantidad de ganado que pastorea en un área: un propietario de ganado que se desplace hacia una nueva área de pastoreo debe solicitar permiso de la gente que ya está ocupando esa área, gente que está organizada en una unidad política efímera denominada "agregación de campamento" [*camp cluster*] (Dyson-Hudson, 1966). Esas interacciones sociales permiten el intercambio de informaciones y pueden regular —en relación con la disponibilidad de recursos— el número de hatos existente en un área particular en un momento dado.

En épocas de escasez severa, la gente asociada en una agregación de campamento puede excluir a otros karimojongs del área donde están haciendo pastar su ganado, o no compartir su provisión de agua; la exclusión se refuerza luchando con palos (Dyson-Hudson, 1966: 73, 255). Sin embargo, los informantes remarcan que esas luchas ocurren solo en tiempos de escasez extrema, cuando la supervivencia de un individuo podría peligrar si comparte los recursos de pastoreo.

El modelo de defensa económica parece reflejar de manera adecuada la compleja y diversificada organización espacial de la tribu karimojong. Los dos complejos de recursos que hemos examinado caen en diferentes cuadrantes del gráfico de nuestro modelo (Figura 1). Los recursos del pastoreo son relativamente impredictibles y tienen densidad diversa (cuadrantes B o A), por lo que los pastores (en particular durante la estación seca) son muy nómadas, se dispersan en campamentos temporarios y forman con otros propietarios de ganado asociaciones efímeras pero importantes. Solo en tiempos de gran escasez los pastores karimojong defienden las áreas de pastoreo; las áreas defendidas son las que en ese momento particular tienen pastos relativamente abundantes.

En contraste, los recursos agrícolas son densos y predecibles tanto en tiempo como en espacio (cuadrante C); las mujeres que practican el cultivo son sedentarias y viven en poblaciones de densidad más bien alta. Hay áreas específicas de tierra agrícola delimitadas y defendidas; también, las cosechas ya levantadas se defienden contra las plagas y contra otros karimojongs. La predictibilidad de un año a otro en los rendimientos agrícolas es demasiado baja para que la cantidad de personas que depende de las cosechas sea constante, pero la flexibilidad de la organización social de los karimojong —que permite a la gente moverse entre poblados permanentes y campamentos ganaderos— permite a los seres humanos capaces ajustarse a las variaciones que ocurren en la abundancia de los recursos.

Tal como nuestro modelo permitía prever, los karimojong por lo general no defienden territorialmente las tierras de pastoreo contra otros integrantes de su tribu. En cambio, defienden las tierras tribales de pastoreo contra quienes no son karimojong. Los enemigos que penetran en la tierra de los karimojong son muertos a lanzazos, y se captura su ganado. Hay también incursiones activas que cruzan los límites tribales.[6] Esta defensa territorial no puede explicarse bien por nuestro modelo, que no prevé respuestas diferentes según se trate de integrantes del propio grupo

6 Pese a los grandes esfuerzos de la administración colonial por impedir las matanzas y las incursiones en búsqueda de ganado, a fines de la década de los cincuenta esto aún constituía una pauta habitual de comportamiento.

o de extranjeros. Sin embargo, entre los diversos grupos humanos tales diferencias son muy comunes.

Un sistema de defensa cooperativa de perímetros que incorpore la exclusión étnica altera de forma notoria los costos y beneficios de la territorialidad (Hamilton y Watt, 1970: 270-272); esto podría ayudar a explicar la defensa que hacen los karimojong de su territorio en sus límites tribales. Un análisis del comportamiento territorial de los karimojong que tome en cuenta la identidad étnica, la exclusión étnica, la comunicación simbólica y la defensa cooperativa del perímetro excede los límites de este artículo.

Conclusiones

Según nuestro punto de vista,

—la territorialidad constituye una serie de estrategias de defensa de recursos; y,

—a su vez, la defensa de los recursos es un aspecto de las estrategias de subsistencia.

Es indudable que en algunas circunstancias los seres humanos son territoriales, en el sentido de ocupar algunas áreas de modo más o menos excluyente mediante el rechazo por defensa abierta o interacciones sociales. Pero es asimismo indudable que —como todos los comportamientos, y si bien la capacidad de demarcar y defender el territorio debe tener alguna base genética— la territorialidad humana no es un rasgo fijado genéticamente, en el sentido de ser una "pauta fija de acción", sino más bien una estrategia posible que podemos esperar que los individuos elijan cuando encuentren ventaja adaptativa en hacerlo.

No nos parece que tengan valor explicativo los análisis que arguyen que la territorialidad sería un imperativo evolutivo o, a la inversa, una aberración política de la naturaleza humana básica. Hemos sostenido que en los seres humanos la territorialidad es (al menos en parte) una respuesta adaptativa a factores ambientales; como tal, debemos esperar

que aparezca cuando los recursos cruciales se distribuyen de forma que el uso excluyente y la defensa de un área de esos recursos produzca un beneficio neto en materia de apropiación de tal recurso.

Nuestro modelo incorpora conceptos que provienen del estudio de la organización social en otras especies animales. En antropología se ha desarrollado de modo independiente la idea de que la organización social se relaciona adaptativamente con las características de los recursos, pero su formulación no ha sido tan precisa como la desarrollada por la sociobiología.[7]

Nuestro análisis sugiere que la territorialidad humana, como en el caso de otras especies animales, puede examinarse de manera fructífera en términos de un modelo general de organización espacial que focalice la distribución de los recursos y la defensa económica. Sin embargo, como los seres humanos utilizan una variedad tan amplia de recursos, aún una población única puede exhibir un rango grande de respuestas con referencia a diferentes recursos; por tanto, describir el comportamiento de un grupo particular como "territorial" o "no territorial" puede resultar simplista. No basta con saber si un grupo particular exhibe comportamiento

7 Muchos antropólogos han presentado recientemente análisis ecológicos de la organización espacial humana, focalizados en especial sobre grupos cazadores-recolectores (por ejemplo: Knight, 1965; Damas, 1969; Heinz, 1972; Lee, 1972; Williams, 1974). Como ya señalamos, pensamos que muchos análisis han presumido excesiva uniformidad en la distribución de los recursos y, por tanto, en las pautas óptimas de organización espacial. Por ejemplo, Wilmsen —que adoptó una postura algo semejante a la nuestra— generalizó (1973: 8) que "los alimentos vegetales, primordialmente cuando son raíces, semillas y frutos secos, son relativamente estables y tienen distribución pareja sobre los hábitats adecuados", siendo explotados de forma más eficiente mediante la dispersión humana. Esto parece difícil de adecuarse a los datos de la Gran Cuenca que antes hemos resumido.

Wilmsen (1973: 6) también parece identificar impredictibilidad espacial de los recursos (como la de los animales de caza mayor) con territorialidad, cuando en realidad el modelo que él presenta define las condiciones bajo las cuales el agrupamiento y el aprovisionamiento cooperativo son óptimos. Dumond (1972: 296) no desarrolló un modelo general, pero efectuó una afirmación que quizá sea la que más se parece a nuestro enfoque.

Según nuestro punto de vista, los análisis antropológicos de la organización espacial de los cazadores-recolectores han hecho pocos progresos desde las fundamentales percepciones de Steward (1938); nuestro artículo es un intento por avanzar más allá de las generalidades que por lo regular dominan la literatura, en dirección de un modelo general que explique (más que "desexplique") la *diversidad* de la organización espacial humana.

territorial: es necesario examinar recursos particulares y determinar si se les defiende, cómo se les defiende, en qué circunstancias se restringe el acceso a esos recursos, y a qué personas o grupos de personas se concede o niega el acceso a esos recursos.

Levins (1966) señaló que los modelos científicos no pueden aumentar a un tiempo la generalidad, el realismo y la precisión. Si el modelo de determinantes ecológicos de la organización espacial que presentamos en este artículo ha destacado algo han sido la generalidad y —en menor medida— el realismo. Por necesidad, hemos simplificado nuestro análisis al tomar en cuenta solo una serie limitada de posibles determinantes. Otros factores que influyen sobre la organización espacial —por ejemplo, el tamaño de los grupos, las estrategias específicas de aprovisionamiento, la organización política o los recursos no alimentarios— no han sido tomados en cuenta por nuestro modelo, que focaliza en exclusiva la distribución de los recursos. Nuestra falla en lograr mayor precisión puede atribuirse a dos factores principales: la necesidad de simplificación y la falta de medidas cuantitativas y operativas de variables cruciales.

La falta de datos cuantitativos relevantes para los parámetros de nuestro modelo constituye un problema serio, pero su solución no debería ser conceptualmente difícil. En el future, sin duda, será posible recoger datos detallados sobre abundancia de recursos, distribución en el tiempo y en el espacio, y pautas de utilización, si bien será difícil reconstruir esos datos a partir de estudios del pasado. En cambio, un problema más serio es el constituido por la ausencia de medidas operativas para conceptos tan importantes como la predictibilidad (sin embargo, véase Harpending y Davis, 1977).

Hay además complejidades en el análisis de los costos energéticos de la defensa de los recursos. El caso de los karimojong, indica que los costos energéticos para la defensa de los recursos pueden ser muy bajos si los valores y creencias comunes hacen que las sanciones rituales para impedir transgresiones sean más efectivas que la defensa abierta. Los costos energéticos bajos solo pueden mantenerse si quedan excluidos los extranjeros que no comparten esas creencias. La exclusión de los extranjeros puede lograse, por ejemplo, mediante la defensa cooperativa del perímetro, lo

que conlleva asimismo un costo energético relativamente bajo. Por tanto, los costos energéticos de las estrategias de defensa de los recursos pueden ser bastante diferentes y necesitar análisis separados según esa defensa sea intra o intergrupal.

Si el modelo que relaciona la defensa económica con la territorialidad, es algo más que un argumento plausible; se deben extraer hipótesis de ese modelo y someterlas a prueba contra buenos datos cuantitativos. Esperamos que otros investigadores en ecología humana reúnan tales datos y comiencen a someter a prueba estos y otros modelos de utilización óptima de los recursos. Sometimientos a prueba adecuados del modelo de defensa económica podrían usar casos en los que varíen las mediciones cuantitativas de la densidad de recursos y de la predictibilidad:

—Sea dentro de un grupo (en el transcurso del tiempo, como en el caso de los ojibwa, o para diferentes clases de recursos, como en el de los karimojong);

—Sea entre grupos que compartan tecnología y organización social similares (como entre los grupos de indios de la Cuenca y Mesetas).

Este enfoque es el que hemos intentado adoptar precedentemente, pero debido a los datos inadecuados nos vimos forzados a asumir un modo cualitativo de argumentación.

El modelo también puede someterse a prueba examinando evidencias de la hipótesis nula. En particular, si fuera posible mostrar que con alguna frecuencia ocurren cambios nítidos desde sistemas no territoriales de organización espacial hacia sistemas territoriales bien definidos sin que haya correlación con incrementos en las medidas de densidad o predictibilidad de los recursos (siempre que la tecnología y la organización social se mantengan constantes y si no se introducen nuevos recursos clave), sería necesario rechazar el modelo tal como ha sido presentado. Sin embargo, mientras tales sometimientos a prueba no se concreten, sostendremos que el modelo de defensa económica explica las evidencias disponibles con profundidad y extensión mayores que otras explicaciones alternativas de la variación en la organización espacial humana.

Referencias

Ardrey, R. 1968. *The territorial imperative*. Atheneum.

Bates, B. C. 1970. Territorial behavior in primates: a review of recent field studies. *Primates*, *11*, 271-284.

Bishop, C. A. 1970. The emergence of hunting territories among the Northern Ojibwa. *Ethnology*, *9*, 1-15.

Bishop, C. A. 1974. *The Northern Ojibwa and the fur trade: an historical and ecological study*. Holt, Rinehart and Winston of Canada.

Brown, J. L. 1964. The evolution of diversity in avian territorial systems. *Wilmsen Bulletin*, *76*, 160-169.

Brown, J. L. y G. H. Orians. 1970. Spacing patterns in mobile animals. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *1*, 239-262.

Burt, W. H. 1943. Territoriality and home range concepts as applied to mammals. *Journal of Mammalogy*, *24*, 346-352.

Carpenter, C. R. 1958. Territoriality: a review of concepts and problems. En A. Roe y G. G. Simpson (coords.). *Behavior and evolution* (224-250). Yale University Press.

Cohen, E. 1976. Environmental orientations: a multidimensional approach to social ecology. *Current Anthropology*, *17*, 49-70.

Cooper, J. M. 1939. Is the Algonquian family hunting ground system pre-Columbian? *American Anthropologist*, *41*, 66-90.

Crook, J. H. 1970. Social behavior and ethology. En J. H. Crook (coord.). *Social behavior in birds and mammals* (XXI-XL). Academic Press.

Crook, J. H. 1972. Sexual selection, dimorphism, and social organization in the primates. En B. G. Campbell (coord.). *Sexual selection and the descent of man, 1871-1971* (231-281). Aldine.

Crook, J. H. 1973. The nature and function of territorial aggression. En Ashley Montagu (coords.). *Man and aggression* (183-220). Oxford University Press.

Damas, D. 1969. Conference on band societies. National Museum of Canada, *Bulletin*, *228*.

Denham, W. W. 1971. Energy relations and some basic properties of primate social organization. *American Anthropologist*, *73*, 77-95.

Dumond, D. E. 1972. Population growth and political centralization. En B. Spooner (coord.). *Population growth: anthropological implications* (286-310). MIT Press.

Durham, W. H. 1976. Resource competition and human aggression: a review of primitive war. *Quarterly Review of Biology*, *51*, 385-415.

Dyson-Hudson, N. 1966. *Karimojong politics*. Oxford University Press.

Dyson-Hudson, R. 1972. Pastoralism: self-image and behavioral reality. *Journal of Asian and African Studies*, *7*(1-2), 30-47.

Dyson-Hudson, R. y N. Dyson-Hudson. 1969. Subsistence herding in Uganda. *Scientific American*, *220*(2), 76-89.

Dyson-Hudson, R., y N. Dyson-Hudson. 1970. The food production system of a semi-nomadic society: the Karimojong, Uganda. En P. F. M. McLoughlin (coord.). *African food production systems: cases and theory* (91- 124). John Hopkins Press.

Eisenberg, J. F., N. A. Muckenhirn y R. Rudran. 1972. The relation between ecology and social structure in primates. *Science*, *176*, 863-874.

Emlen, S. T. y N. Demong. 1975. Adaptive significance of synchronized breeding in a colonial bird: a new hypothesis. *Science*, *188*, 1029-1031.

Esser, A. H. (comp.). 1971. *Behavior and environment: the use of space by animals and men*. Plenum.

Gill, F. B. y L. L. Wolf. 1975. Economics of feeding territoriality in the golden-wingen sunbird. *Ecology*, *56*, 333-345.

Hallowell, A. I. 1949. The size of Algonkian hunting territories: a function of ecological adjustement. *American Anthropologist*, *51*, 35-45.

Hamilton III, W. J., R. F. Buskirk y W. H. Buskirk. 1976. Defense of space and resources by chacma (*Papio ursinus*) baboon troops in an african desert and swamp. *Ecology*, *57*, 1264-1272.

Hamilton, W. J., III, y K. E. F. Watt. 1970. Refuging. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *1*, 263-286.

Harpending, H. y H. Davis. 1977. Some implications for hunter-gatherer ecology derived from the spatial structure of resources. *World Archaeology*, *8*, 275-283.

Heinz, H. J. 1972. Territoriality among the Bushmen in general and the! Ko in particular. *Anthropos*, *67*, 405-416.

Hinde, R. A. 1956. The biological significance of the territories of birds. *Ibis*, *98*, 340-369.

Horn, H. S. 1968. The adaptive significance of colonial nesting in the Brewers blackbird. (*Euphagus cyanocephalus*). *Ecology*, *49*, 682-694.

King, G. E. 1975. Socioterritorial units among carnivores and early hominids. *Journal of Anthropological Research*, *31*, 69-87.

King, G. E. 1976. Society and territory in human evolution. *Journal of Evolution*, *5*, 323-332.

Klopfer, P. H. 1969. *Habitats and territories: a study of the use of space by animals.* Basic Books.

Knight, R. 1965. A re-examination of hunting, trapping, and territoriality among the Northeastern Algonkian indians. En A. Leeds y A. P. Vayda (coords.). *Man, culture, and animals* (27-42). American Association for the Advancement of Science Publication 78.

Lack, D.1963. *Ecological adaptations for breeding in birds*. Methuen.

Leacock, E. 1954. The montagnais "hunting territory" and the fur trade. *American Anthropologist Association. Memoir*, *78*.

Lee, R. B. 1972. Kung spatial organization: an ecological and historical perspective. *Human Ecology*, *1*, 125-147.

Lee, R. B. e I. DeVore (comps.). 1968. *Man the hunter*. Aldine.

Levins, R. 1966. The strategy of model building in population biology. *American Scientist*, *54*, 421-431.

Martin, M. K. 1974. The foraging adaptation —uniformity or diversity? *Module in Anthropology*, 56. Addison-Wesley.

Peterson, N. 1975. Hunter-gatherer territoriality: the perspective from Australia. *American Anthropologist*, *77*, 53-68.

Pianka, E. R. 1974. *Evolutionary ecology*. Harper and Row.

Radcliffe-Brown, A. R. 1930. The social organization of Australian tribes. *Oceania*, *1*, 34-63.

Reynolds, V. 1966. Open groups in hominid evolution. *Man*, *1*, 441-452.

Reynolds, V. y F. Reynolds. 1965. Chimpanzees of the Budongo forest. En I. DeVore (coord.). *Primate behavior* (368-424). Holt, Rinehard and Winston.

Service, E. R. 1962. *Primitive social organization*. Random House.

Service, E. R. 1971. *Primitive social organization*. Segunda edición. Random House.

Service, E. R.1975. *Origins of the state and civilization*. Norton.

Smith, C. C. 1968. The adaptive nature of social organization in the genus of tree squirrels. *Tamiascirius*. *Ecological Monographs*, *40*, 349-371.

Smith, E. A. 1977. Adaptation and energetic efficiency: a general model. MS del autor.

Speck, F. G. 1915. The family hunting band as the basis of Algonkian social organization. *American Anthropologist*, *17*, 289-305.

Speck, F. G. 1923. Mistassini hunting territories in the Labrador peninsula. *American Anthropologist*, *25*, 452-471.

Speck, F. G. y L. C. Eiseley. 1939. The significance of the hunting territory system of the Algonkian in social theory. *American Anthropologist*, *41*, 269-280.

Steward, J. H. 1938. Basin-plateau aboriginal sociopolitical groups. *Bureau of American Ethnology. Bulletin*, *120*.

Steward, J. H. 1955. The Great Basin Shoshonean Indians: an example of a family level of sociocultural integration. En J. H. Steward (coord.). *Theory of culture change* (101-121). University of Illinois Press.

Thomas, D. H. 1972. Western Shoshone Ecology: settlement patterns and beyond. En Don Folwer (coord.). *Great Basin cultural ecology: a symposium* (135-154). Desert Research Institute, Reno, Publ. en *Social Science*, *8*.

Thomas, D. H. 1973. An empirical test for Steward's model of Great Basin settlement patterns. *American Antiquity*, *38*, 155-176.

Thomas, D. H. 1974. An archaeological perspective on Shoshonean bands. *American Anthropologist*, *76*, 11-23.

Tinbergen, N. 1957. The functions of bird territory. *Bird Study*, *4*, 14-27.

Ward, P. y A. Zahavi. 1973. The importance of certain assemblages of birds as "information-centres" for food- finding. *Ibis*, *115*, 517-534.

Williams, B. J. 1974. A model of band society. Society for American Archaeology, *Memoir*, *29*.

Wilmsen, E. N. 1973. Interaction, spacing behavior, and the organization of hunting bands. *Journal of Anthropological Research*, *29*, 1-31.

Wilson, E. O. 1971. Competitive and aggressive behavior. En J. F. Eisenberg y W. S. Dillon (coords.). *Man and beast: comparative social behavior* (181-217). Smithsonian Institution Press.

Wilson, E O. 1975. *Sociobiology: the new synthesis*. Harvard University Press.

Wolf, L. L. y F. R. Hainsworth. 1971. Time and energy budgets of territorial humming birds. *Ecology*, *52*, 980-988.

Zahavi, A. 1971. The social behavior of the white wagtail wintering in Israel. *Ibis*, *113*, 203-211.

6. El programa de investigación de ecología histórica*[1]

William Balée

Resumen: La ecología histórica es un nuevo programa de investigación interdisciplinario que se ocupa de la comprensión de las dimensiones temporales y espaciales de las relaciones de las sociedades humanas con los entornos locales y los efectos acumulativos globales de estas relaciones. La ecología histórica contiene postulados básicos que se refieren a los tipos cualitativos de la mediación humana, la perturbación de los entornos naturales y el efecto de estos sobre la diversidad de especies, entre otros parámetros. Un término central utilizado en ecología histórica para situar el comportamiento y la agencia humana en el ambiente es el paisaje, tal como se deriva de la geografía histórica, en lugar del ecosistema, que es de la ecología de sistemas. La ecología histórica es similar a la teoría dinámica del no equilibrio, pero difiere en su postulado de la perturbación humana como principio de la transformación del paisaje. Estas perturbaciones pueden implicar, contra intuitivamente, sucesiones primarias y secundarias de origen antropogénico que resulten en un aumento neto de la diversidad alfa e incluso beta. La ecología histórica aplicada puede aportar las condiciones de referencia de profundidad temporal y conocimientos tradicionales para restaurar paisajes del pasado.

---

1 Publicado originalmente en William Balée, 2006, "The research program of historical ecology", *Annual Review of Anthropology*, *35*: 75-98.

*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto pueden no figurar en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen. Con el fin de respetar íntegramente el contenido y la forma del texto de origen, no se ha añadido, modificado ni completado referencias más allá de lo proporcionado por los autores.

Introducción

La ecología histórica es un programa de investigación que se ocupa de las interacciones a lo largo del tiempo entre sociedades y entornos, y de las consecuencias de estas interacciones para la comprensión de la formación de culturas y paisajes contemporáneos y pasados (Balée, 1998b; Balée y Erickson, 2006a; 2006b; Crumley, 1994; 1998; 2003; Redman, 1999; Sutton y Anderson, 2004). Un programa de investigación es un conjunto de postulados separados sobre los cuales solo una parte de la comunidad científica está de acuerdo (Lakatos, 1980; Stengers, 2000; 1993). Esto lo distingue de un paradigma, que en el sentido kuhniano de la ciencia normal asume la existencia de modelos conflictuados intentando explicar que los mismos fenómenos no pueden coexistir (Kuhn, 1970; Stengers, 2000; 1993). Dentro de la antropología, los programas de investigación incluyen la ecología cultural y la sociobiología. Hace una generación, dentro de las ciencias sociales, los programas de investigación habrían incluido al marxismo y al psicoanálisis (Lakatos, 1999; 1973). Dentro de la ecología, tanto la teoría de sistemas como la dinámica del no equilibrio constituyen programas de investigación separados (Zimmerer, 2000).

Los programas de investigación suelen consistir en tres a cinco postulados fundamentales (Lakatos, 1999; 1973). En la ecología histórica, los postulados son los siguientes: (a) Prácticamente todos los ambientes de la tierra han sido afectados por los humanos, incluyendo, en un sentido amplio, las actividades de comportamiento del género *Homo* (Kidder y Balée, 1998; Redman, 1999; Sauer, 1956), aunque otros autores limitarían el amplio efecto de los humanos sobre el ambiente solo desde los inicios del Holoceno, o sea el tiempo que coincide con los inicios de la agricultura (Dickinson, 2000); (b) la naturaleza humana no está programada genéticamente ni de otro modo para disminuir o aumentar la diversidad de especies u otros parámetros ambientales (Crumley, 2001; Hayashida, 2005); (c) de ello se deduce que los tipos de sociedades definidas por diversos criterios socioeconómicos, políticos y culturales impactan los paisajes de maneras disímiles, por lo que algunos paisajes están menos perturbados (y son más ricos en especie) que otros; y (d) las interacciones humanas con los paisajes en una amplia variedad de contextos históricos y

ecológicos pueden estudiarse como un fenómeno total (integrador) (Balée, 1998b; Egan y Howell, 2001b; Rival, 2006; Sutton y Anderson 2004).

Los ecologistas históricos adoptan una visión a largo plazo de la historia y de los paisajes, y así suelen estar en desacuerdo con programas de investigación establecidos y más antiguos, como la antropología ambiental (Balée y Erickson, 2006b; Braudel, 1980; Crumley, 1994; 1998; 2003; Kidder y Balée, 1998; Russell, 1997). La ecología histórica ejemplifica el revisionismo de conceptos dominantes desde antaño en la ecología cultural, el evolucionismo cultural, el materialismo cultural y la teoría de sistemas ecológicos (Dove, 2001; *cf.* Headland, 1997; Rival, 2006). Es un medio interdisciplinario para abordar aplicaciones tanto de las ciencias sociales como de ciencias de la vida (Balée, 1998a; 1998b; Crumley, 1994; 1998; 2003), siendo la más importante para las preocupaciones estratégicas ambientales la ecología de restauración, un sinónimo de la ecología histórica aplicada (Anderson, 2001; Egan y Howell, 2001a; 2001b; Higgs, 2003).

La ecología histórica emergió de los estudios empíricos que mostraban problemas en la aplicabilidad de la antropología ecológica para las sociedades complejas. Los campesinados y otras sociedades complejas con capas socioeconómicas diferenciadas no podrían ser analizados con las metodologías desarrolladas por la ecología cultural. Esto debido a que la ecología cultural sólo hacía referencia a sociedades simples o sin clases, donde por un lado se suponía que existía una relación lineal entre los rasgos clave de la tecnología indígena y el ambiente, y la población baja y la organización política simple, por el otro (Boglioli, 2000; Cole y Wolf, 1974). No se consideró que tales sociedades ejercieran un efecto a largo plazo en el ambiente local, como para adaptarse a sus supuestas limitaciones (Adams, 1998; Balée, 1989; Balée y Erickson, 2006b; Cole y Wolf, 1974; Stahl, 1996; Wolf, 1982; 1999). Dentro de la antropología ecológica, la teoría de sistemas representó un intento de darle más rigor matemático a los objetos de estudio, en particular al concebir las sociedades humanas como poblaciones que intercambian energía con otras poblaciones de animales y plantas dentro de los ecosistemas (Rappaport, 2000). La teoría de sistemas en la antropología, igual que en la ecología,

fue ahistórica y excluyó la agencia humana y la intencionalidad dentro de los paisajes (Dove, 2001; Wolf, 1999; Biersack, 1999).

Un segundo mundo

En la ecología histórica, el paisaje es un lugar de interacción con una dimensión temporal que es per se tan histórica y cultural como evolutiva, donde acontecimientos del pasado han sido registrados, a veces con mucha sutileza, en la tierra (Crumley, 2003; Ingold, 1993; Marquardt y Crumley, 1987; Neves y Petersen, 2006; Russell, 1997). La historia ecológica registra a los simples recolectores y a los horticultores como agentes de la historia que manifiestan pasados culturales que desafían la ubicación en algún estadio de la evolución política (Cormier, 2003; Crumley, 2003; Politis, 2001; Rival, 2002; Rival, 2006; Zent y Zent, 2004). Wolf (1982) demostró que la ecología cultural carecía de una teoría unificada y que no podía trascender las explicaciones de casos individuales debido a su énfasis en las adaptaciones humanas al ambiente, más que considerar a la sociedad como comprometida con ese ambiente y actuando de manera efectiva para modificarlo en el transcurso del tiempo. Wolf (1999) argumentó que la antropología ambiental necesitaba abandonar la teoría de sistemas y convertirse en ecología política e histórica para poder evaluar los cambios en las relaciones entre las sociedades humanas y sus paisajes.

La ecología histórica ha cuestionado la idea de "primitivos prístinos" [*sic*] (Wolf, 1982) y los bosques pluviales vírgenes (Balée, 1989; Denevan, 1992) a través de diferentes, pero al final convergentes líneas de pensamiento interdisciplinar en la antropología, la geografía, la historia y la ecología (Hayashida, 2005). La idea de que los paisajes tienen historia y que los elementos naturales en ambientes dados son indicios historiográficos de esos ambientes tiene sus precursores en diversos campos, de manera particular en la historia y la geografía. El clásico estudio del historiador Cronon (1983) sobre el impacto de los indios precoloniales de la Nueva Inglaterra en el moldeado de su paisaje, que a su vez los puritanos habían conceptuado como prístino, representaba un reto empírico al concepto de los originarios, atados por los límites de los bosques vírgenes (Turner,

2005). El mecanismo principal responsable por los paisajes modelados que observaban los puritanos fue el fuego controlado (o de difusión) (Cronon, 1983; Pyne, 1998).

Las sociedades indígenas no solo moldearon ambientes como mosaicos con zonas ricas en recursos naturales utilitarios, sino que también en algunos casos mejoraron la diversidad local de especies (alfa). En concreto, se considera que los incendios controlados han aumentado la heterogeneidad de los paisajes locales junto con la diversidad de especies (por lo general, de especies poco comunes), en parte al impedir la acumulación de combustible y, así, la posibilidad de incendios forestales destructivos en numerosas regiones indígenas de América del Norte, América del Sur y Australia (Anderson, 1999; Bird *et al*., 2005; Boyd, 1999a; 1999b; Lunt y Spooner, 2005; Mistry *et al*., 2005; Posey, 1985; Pyne, 1991; 1998; Robbins, 1999; Storm, 2002; Winthrop, 2001; Foster *et al*., 2004). El fuego deliberado en casos controlados puede ampliar la diversidad, mientras los incendios salvajes y la quema por combustibles fósiles tienden a provocar efectos de degradación, nos lleva de regreso al concepto de paisaje, donde los humanos y el ambiente se encuentran en un todo analítico, con una dimensión temporal que define la relación (Balée, 1998a; Crumley, 1994; 2003; Ingold, 1993; Marquardt y Crumley, 1987; Pyne, 1998).

La noción de paisaje en su versión más reciente se origina en la geografía cultural e histórica (Denevan, 2001; Doolittle, 2000; Kates *et al*., 1990; Olwig, 2003; Rival, 2006; Sutton y Anderson, 2004). Muy tempranamente, los geógrafos derivaron la idea de la inseparabilidad de los humanos y el ambiente en el contexto de un paisaje (*Landschaft*) en parte de los paisajistas y arquitectos alemanes del siglo XIX (Crumley, 1994; Hall, 2005; Wolschke-Bulmahn, 2004) y de las escuelas de pintores de paisaje decimonónicos en Europa, América del Norte y Australia, quienes buscaban plasmar sus ideas de la naturaleza salvaje y la humanidad que la habitaba, tanto en los lienzos como en la psique occidental (Hirsch y O'Haulon, 1995). El paisaje en la ecología histórica también ha sido influido por la escuela historiográfica francesa de los *Annales*, en concebir que el *paysage* sufre varias formas de cambio temporal tanto en el corto y largo plazo como cíclico (Braudel, 1980; Crumley, 1998).

El pensamiento de que los humanos son agentes históricos del cambio en el paisaje en todas partes (más allá de su consciencia de serlo), materializando este rol por medio de la agricultura o alguna otra interferencia claramente humana, tiene su origen en la antigüedad clásica (Glacken, 1967; Hall, 2005; Hughes, 1975). Heródoto propuso que los eventos históricos se despliegan en un lugar físico y que las características del lugar, a su vez, cambian en el transcurso del tiempo. Es decir, la cultura y el ambiente están en cierto sentido entrelazados y se transforman juntos en el tiempo (Pitzl, 2004). Cicerón escribió sobre cómo mediante la domesticación, la fertilización y la irrigación los humanos influyeron en la creación de un segundo mundo aparte del llamado mundo natural (Glacken, 1967; Hughes, 1975; Wolschke-Bulmahn, 2004), un concepto que encontró eco 1 700 años después durante la Ilustración (Roger, 1997).

El segundo mundo de Cicerón fue un mundo construido. Quizá no habría reconocido la existencia de segundos mundos en África subsahariana, Australia, las tierras bajas de América del Sur y una gran parte de América del Norte. Igual que en el pensamiento del Renacimiento y la Ilustración, tales regiones fueron consideradas regiones silvestres (Raffles, 2002; Roger, 1997). Desde la perspectiva europea del siglo XIX, el segundo mundo incorporaba cosas naturales y culturales, con frecuencia en un escenario como un jardín, siendo esto especialmente visible en Italia y Alemania (Hall, 2005; Wolschke-Bulmahn, 2004). El jardín como un paisaje definido en el espacio, que involucra la naturaleza y la cultura, precede a la civilización europea, después de que esta lo tomara prestado de la sociedad helénica de Asia Oriental (Glacken, 1967).

El jardín es la premisa subyacente de un paisaje; allí, los humanos habitualmente interactúan con otras formas de vida, de modo cíclico, en el largo plazo (involucrando por lo menos algunas décadas) y en el muy largo plazo (durante siglos), un concepto conocido como *longue durée* (Braudel, 1980). Los ecólogos históricos han podido discernir jardines en medio de lo que parecen ser áreas silvestres tanto en los neotrópicos como en los paleotrópicos. Estos han sido denominados jardines de bosque, parcelas del bosque, jardines de los caminos, jardines de guerra, bosques tropicales hechos por la humanidad, bosques culturales antropogénicos y paisajes

domesticados (Balée, 1989; Clement, 1999a; Denevan, 1992; 2001; 2006; Erickson, 2006; Gómez-Pampa *et al*., 1987; 1990; Heckenberger *et al*., 2003; Janzen, 1998; Posey, 1985; Posey y Balée, 1989; Rival, 2006). Estos se distinguen de los paisajes culturales, que no están tan perturbados por los humanos, sino que más bien son indiciarios (por su biota icónica y lugares perceptibles a simple vista) de las sociedades locales y su historia a largo plazo in situ (Stoffle *et al*., 2003). Los ecólogos históricos también examinan las funciones indiciarias de la biota en paisajes específicos afectados por la actividad humana a lo largo del tiempo (Feely-Harnik, 2001; Verheyen *et al*., 2004; Walker, 2000).

Existe una división histórica entre geógrafos y silvicultores europeos entre paisajes domesticados (o culturalizados) y paisajes naturales (Alexander y Butler, 2004). El concepto de bosques prístinos es reemplazado poco a poco con la noción más evasiva de crecimiento de bosque viejo. Este concepto, tanto en Europa como en América del Norte, incluye aquellos bosques que pueden haber sido perturbados por los humanos, aunque no durante largos periodos, la llamada primera naturaleza (Rudel, 2002). Existe, sin embargo, una evidencia creciente de que las perturbaciones intermedias pueden tener legados perdurables, de tipo *longue durée*, en términos de una redefinición de los patrones de vegetación (Turner, 2005). Los paisajes culturalizados de Europa varían desde zonas sin árboles a bosques maduros similares a los bosques antiguos, pero ninguno es primario, aunque algunas especies son consideradas una reliquia; aún pueden encontrarse líquenes, briofitas y hongos micorrícicos, junto a algunos árboles antiguos (Myers y Bazely, 2003). El geógrafo histórico Sauer propuso que dondequiera que habían vivido los humanos y donde habían impactado el ambiente mediante la domesticación, el resultado serían paisajes con historias determinadas (Olwig, 2003; Rival, 2006; Sauer, 1956). En tiempos más recientes, algunos investigadores han argumentado que los impactos de la agricultura del Holoceno han transformado el mundo de tal manera que casi ninguna parte puede ser considerada prístina per se. Según ellos, los paisajes típicamente considerados como ejemplos de ambientes del Holoceno han sido creados por la humanidad (Denevan, 1992; Dickinson, 2000). La idea de que ciertos paisajes boscosos, ricos en especies del Gran

Amazonas, América Central y África Occidental eran áreas silvestres prístinas ha sido cuestionada por datos e interpretaciones nuevas en las últimas dos décadas del siglo XX por antropólogos, geógrafos y biólogos (Balée, 1989; Balée y Campbell, 1990; Denevan, 1992; 2002; Fairhead y Leach, 1996; Gómez-Pampa y Kraus, 1992; Gómez-Pampa e*t al*., 1987; Hayashida, 2005; Leach y Fairhead, 2000; Posey, 1985; Posey y Balée, 1989; Rival, 2006; Stahl, 1996; Parker, 1992) quienes proporcionaron evidencias de la actividad humana en el origen de estos paisajes.

En la historia ecológica, el concepto de transformación de paisajes, dando como resultado los llamados bosques humanizados (Campbell *et al*., 2006; Gómez-Pampa *et al*., 1987; Wiseman, 1978), se derivó en principio de las evidencias de la agricultura y la agrosilvicultura. Trabajos recientes sugieren que sociedades recolectoras y nómadas también han influido en la composición de bosques mediante actividades como la siembra de propágulos de árboles que atraen a las abejas, sin usar el fuego para el desmonte de bosques (Zent y Zent, 2004) y abandonando los campamentos, pero dejando cambios en la composición de especies que involucran la coexistencia de cultivos y no cultivos (Politis, 2001; Rival, 2002; 2006). Las evidencias de sociedades sin clases como agentes perturbadores que modificaron y gestionaron ambientes que antes habían sido vistos como concatenaciones de biota primordial e interactiva con elementos físicos representa, en la ecología histórica, una divergencia de los postulados básicos de la ecología cultural y también de la teoría del equilibrio.

Otras ecologías, otras historias

La distinción entre la ecología histórica y otros enfoques ecológicos y disciplinas tiene que ver sobre todo con el antropocentrismo en una forma u otra (Balée y Erickson, 2006b). La ecología histórica difiere de la ecología cultural en el criterio de la agencia humana, junto con la idea de adaptación al ambiente. La ecología cultural sostiene que el ambiente no es transformable. Los humanos deben adaptar sus culturas, tecnologías y poblaciones al medio. Típicamente, la ecología cultural no puede explicar fenómenos de un orden superior como las ciudades, los Estados y sus

periferias dependientes debido al hecho de que sus postulados centrales se basan en el determinismo de sociedades con tecnologías simples (Cole y Wolf, 1974). El materialismo histórico, como programa de investigación (Lakatos, 1999; 1973) toma en cuenta la agencia humana en las apropiaciones iniciales desde y de la naturaleza (Wolf, 1982), pero no conceptualiza que el ambiente, una vez transformado por la actividad humana, puede ejercer un efecto a largo plazo sobre culturas humanas posteriores en la misma región (Balée, 1998a; 1998b). El materialismo histórico carecía de la noción del *longue durée* de la Escuela de los *Annales*, que sólo sería desarrollada un siglo después (Crumley, 1998).

La ecología histórica se distingue de la ecología antropológica de sistemas —en sí misma una crítica de la ecología cultural— en tanto que deja atrás una preocupación por las adaptaciones funcionalistas del comportamiento humano y se acerca a las condiciones ambientales dadas y los estados estables de los ecosistemas (Wolf, 1999; Biersack, 1999). Aunque la ecología histórica subraya la importancia del tiempo y la contingencia en el cambio ambiental (Botkin, 1990; Scoones, 1999; Zimmerer, 2000), como lo hace también la nueva ecología, no pretende ser un registro formulado de los cambios geológicos ocurridos en la ausencia de los humanos, ni un estudio de las respuestas humanas a los desastres naturales (Bilsky, 1980), o simplemente la historia o prehistoria registrada de un ambiente dado. Se distingue de la nueva ecología en que tampoco es aceptada como un modelo distintivo en la ecología (Zimmerer, 2000), en tanto que hace hincapié en una historia antropocéntrica. La ecología histórica implica una formación tripartita de conceptualizaciones del tiempo humano, tomada de los *Annales*; en concreto, los siguientes: (a) *événement* (evento) como un fenómeno episódico, de corto plazo; (b) *conjuncture* (ciclo), que involucra patrones estadísticos repetitivos por una década, un cuarto de siglo o medio siglo; y (c) *longue durée*, los patrones empíricos de la historia y la prehistoria que ocurren durante siglos (Braudel, 1980; Crumley, 2003).

Con frecuencia se ha querido fundir la ecología histórica con la historia ambiental. La historia ambiental es un tema interdisciplinario bastante bien establecido (Beinart y McGregor, 2003; Crosby, 2004; Hughes, 2001;

Worster, 1993), pero no es una perspectiva que articula postulados centrales, como sí lo hace la ecología histórica. En este sentido, la ecología histórica no pertenece a la historia ambiental ni existe de manera paralela como una manera separada de pensar (Moran, 2000; Myllntaus, 2001). La historia ambiental engloba lo siguiente: la historia comparada de la actividad humana en entornos separados pero estructuralmente similares, con condiciones políticas, económicas e históricas convergentes, la historia de los movimientos ecologistas y su relación con la política gubernamental, la historia de las ciencias del ambiente y la silvicultura, la historiografía de la historia del ambiente y la historiografía de la escritura de la historia ambiental (Beinart y Coates, 1995; Crosby, 2004; Hughes, 2001; Worster, 1994). La historia ecológica de un paisaje, como los Llanos de Mojos de Bolivia o el Alto Xingu de Brasil (Erickson y Balée, 2006; Heckenberger *et al*., 2003; Mann, 2002), no sería equivalente con una historia ambiental del mismo paisaje porque la ecología histórica se subscribe a una teoría única de la historia y ofrece un modelo de cómo y por qué el paisaje se transformó, con independencia de la cronología única de acontecimientos.

La ecología histórica se distingue de la ecología del paisaje (Moran, 2000). La ecología del paisaje se enfoca en la heterogeneidad espacial reflejada en agrupaciones de ecosistemas y, con excepciones notables (Hayashida, 2005; Turner, 2005), suele excluir, como un principio, la perturbación humana intermedia de ambientes y sus cambios temporales como un factor cualitativo en la transformación de paisajes (Forman y Godron, 1986; Turner, 2005; Crumley, 1998; 2003; Denevan, 2006). Los conceptos de diseño, ecología y arquitectura de paisajes en el sentido moderno parecen aludir a una reeducación de los seres humanos para que puedan vivir de forma más armoniosa con los sistemas y procesos naturales. Básicamente, la ecología del paisaje no involucra la recuperación de conocimiento indígena o local, lo que podría resultar útil para la restauración ecológica (Gunn, 1994), que, por lo menos en uno de sus aspectos cruciales, la autenticidad, se encuentra muy cercana o es idéntica a la ecología histórica (Anderson, 2001; Egan y Howell, 2001a; 2001b; Higgs, 2003; Jones, 2004).

En ocasiones se compara la ecología histórica con la ecología política, o se consideran como iguales (Wolf, 1999). Muchos han considerado el término de ecología política como un nombre inapropiado y afirman que solo se refiere a la política y no a la ecología (Vayda y Walters, 1999) y que no contribuye al conocimiento relevante para la ecología y las ciencias naturales (Scoones, 1999). En algunos aspectos, la ecología política es más parecida a la historia ambiental con su énfasis en la crítica de los movimientos conservacionistas (Dove, 2001). Sin embargo, la ecología política sí contiene un aspecto que tiene relevancia para la ecología histórica: la posibilidad de comprender y aplicar los modelos populares reinantes de la naturaleza y el ambiente para construir un enfoque más elaborado hacia la reconstrucción de los paisajes del pasado. La ecología política podría considerarse como un sinónimo de la ecología histórica aplicada, pero el término quizá aún se emplea ampliamente en sentidos dispares para referirse a un campo o teoría.

La antropología ecológica de la práctica (influida por la sociología de Pierre Bourdieu) instituye como tercer postulado fundamental de la ecología histórica el destacar los resultados ambientales diferenciados obtenidos de historias económicas y políticas en determinadas regiones (Nyerges, 1997; Porro, 2005). La propuesta de una ecología de eventos (Vayda y Walters, 1999) está atada a las limitaciones particularistas de los estudios caso por caso, de manera similar a lo que ocurre en la ecología cultural (Wolf, 1982), y la omisión de la agencia humana en la formación de paisajes. Así, en realidad no representa un concepto nuevo. La noción de *événement* en los Annales no es más que la característica episódica a corto plazo que afecta a la formación de nuevos paisajes —los otros son *conjonctures* y *longue durée* (Braudel, 1980; Crumley, 1998), conceptos incorporados a los postulados centrales de la ecología histórica—. Estos postulados contradicen, además, la teoría del equilibrio y la teoría de sistemas —en esencia, sinónimos— en la ecología.

La ecología histórica es diferente, y está fundamentalmente en desacuerdo con la teoría ecológica de sistemas, por una lógica similar. Esta lógica señala el comportamiento de seres sensibles y sabios con capacidades culturales no sólo para transformar ambientes diversos en especies en baldíos desprovistos de complejidad y homogeneidad de paisaje evidente,

algo que claramente los humanos son capaces de hacer y que ya han hecho, pero también en ciertos casos para aumentar la diversidad de especies en ambientes locales mediante prácticas continuas de manejo de recursos. La ecología histórica responde al llamado de una visión antropocéntrica, en contraposición a una ecología ecocéntrica o geocéntrica (Balée y Erickson, 2006a; 2006b; Erickson y Balée, 2006). Algunas formas de pensar ecologistas interpretan estas prácticas como destructivas, aun cuando a un determinado nivel de intensidad la intervención humana puede ser esencial para mantener la diversidad misma, un hallazgo comprensible desde un punto de vista histórico-ecológico, que tiene afinidades, como tal, con otros modelos de la ecología contemporánea, como la dinámica de no equilibrio. Este descubrimiento es comprensible dentro del punto de vista de la ecología histórica, que tiene afinidades con otros modelos dentro de la ecología contemporánea, incluyendo la dinámica del no equilibrio (Botkin, 1990; Huston, 1994; Turner, 2005; Zimmerer, 2000).

Contingencia histórica y sucesión ecológica

Los ambientes —ecosistemas dentro de la teoría de sistemas— pasan por historias de modificaciones en sus características fundamentales de manera similar a los conjuntos o agrupaciones de plantas y animales en el transcurso del tiempo. La perturbación es el origen nomotético (llamado sucesión) en la composición de especies en una localidad, y, sin ella, los ecosistemas no evolucionan para mostrar comunidades clímax, definidas como ecosistemas en su estado más maduro, con el más alto nivel de diversidad de especies. La teoría del equilibrio o la teoría de sistemas en la ecología señala que los ambientes estables en áreas amplias (como continentes) sostienen más comunidades clímax que consisten en su mayoría de organismos seleccionados por K, o sea, organismos con una larga esperanza de vida, poca descendencia y ritmos de crecimiento lentos. En el caso de las comunidades de bosque, estos serían árboles y otros organismos estructurales (Huston, 1994). En contraste, ambientes reducidos de tamaño (como los insulares) consisten en su mayoría en organismos seleccionados por R, o sea, plantas con una corta esperanza de vida, alta

descendencia y ritmos rápidos de crecimiento. Estos ecosistemas son más fácilmente invadidos por especies procedentes de continentes. Dado que las islas se desarrollan a través de clines de deriva genética y endemismo (como con los pinzones de Darwin), también son más propensas a las extinciones. La teoría, conocida como la teoría biogeográfica insular (MacArthur y Wilson, 1967), propone que cuanto más alejada una isla se encuentre de un continente más alto será su nivel de endemismo, la diversidad de especies, y más alto el número de especies seleccionados por K. En contraste, cuanto más cerca se encuentra la isla del continente, en igualdad de condiciones, más baja será su diversidad como resultado de su susceptibilidad a las invasiones de organismos del continente que reemplazan la biota local en los mismos nichos, o similares, y así provocan su extirpación o posible extinción (o sea, un resultado de exclusión competitiva). La teoría es elegante como un modelo cualitativo del aumento y disminución de la diversidad de las especies en las islas (es decir, los ecosistemas), pero se ha considerado problemática para la predicción cuantitativa (Peters, 1991) porque no especifica un parámetro humano o histórico en el transporte de muchas especies invasivas, cuando algunos de ellas, como la serpiente arbórea marrón en Guam, pueden tener efectos de cascada en los ambientes nuevos (Fritts y Rodder, 1998). La teoría excluye la historia, y en parte por esa razón ha sido difícil replicarla en el mundo real de la diversidad en islas y la biología de la invasión (Huston, 1994; Lomolino, 2000; Simberloff, 1997).

La invasión de especies es un tipo de perturbación. De hecho, la perturbación puede ser tanto biótica como abiótica. También puede ser cultural o histórica. Cuando es claramente natural y no relacionada con el calentamiento global o la construcción defectuosa de diques o presas, u otros tipos de errores humanos, los huracanes e inundaciones son agentes de perturbación abióticos que pueden explicar la reducción de bosques con muchas especies seleccionadas por K y los ambientes convertidos casi en praderas, sabanas y repletos de especies seleccionados por r (Huston, 1994). Los huracanes y las inundaciones también pueden provocar que un ambiente terrestre se vuelva marino, por ejemplo, dividiendo una isla en dos (Walker y Moral, 2003). Los factores bióticos no solo incluyen a

las especies invasoras y sus efectos en la biodiversidad local (o para reducirlo o reemplazarlo con nuevas especies), sino también los organismos que evidentemente alteran los paisajes habitados por otras formas de vida (Schmitz *et al*. 1997; Simberloff, 1997).

Los humanos afectan y reciben la influencia de los cambios en el paisaje. La dicotomía en la Grecia antigua entre *physis* (naturaleza) y *nomos* (cultura) (Glacken, 1967; Hughes, 2001) que prefigura el dualismo cartesiano del cuerpo (mundo material) *versus* la mente (el pensamiento) no se aplica en la comprensión de la sucesión ecológica como modificada o interferida por humanos como el agente de perturbación. La ecología histórica no se ocupa de la síntesis de humanos con su ambiente, sino en el resultado de su interacción cíclica (*conjoncture*).

Históricamente, cuanto más centralizado sea el régimen político (es decir, en la medida en que más se parece a un Estado), existe mayor potencial para la reducción en la diversidad de especies. Se sabe desde hace tiempo que las tecnologías avanzadas industrializadas que utilizan los combustibles de origen fósil reducen la diversidad genética de las plantas de cultivo (Kates *et al*., 1990). Las civilizaciones antiguas que practicaban la agricultura intensiva (con terrazas, la irrigación y los fertilizantes) redujeron la diversidad de cultivos tradicionales en las parcelas agrícolas como resultado de las exigencias de la tributación en un número reducido de alimentos (Zimmerer, 1993). Es interesante notar que la despoblación humana, como ocurrió en la Amazonia (y más en general en las Américas y Australia) después del contacto y la introducción de nuevos patógenos, puede reducir la agrodiversidad de variedades en aquellas áreas donde el conocimiento y las prácticas locales resultan claves para el manejo de los cultivos tradicionales, incluyendo los cultivos de árboles (Clement, 1999a; 1999b). Si se considera que la diversidad genética por debajo del rango de especies es parte de la diversidad de una región, entonces la diversidad gamma se habrá reducido como resultado de la extracción de las personas del paisaje. La despoblación y otras consecuencias del contacto han conllevado a la pérdida de la agricultura y otras tecnologías básicas, e incluso a la desaparición de la capacidad cultural de una sociedad para producir

el fuego, un aspecto que antaño se consideraba un universal sociocultural (Balée, 2000; Cormier, 2003).

Con respecto a la agricultura de las sociedades industriales avanzadas (Kates *et al*., 1990), solo la fertilización suele reducir la biodiversidad (Huston, 1994) al incrementar la competencia por nutrientes entre las especies originalmente presentes en una parcela. Es una paradoja del enriquecimiento: las áreas de productividad primaria alta (ricas en nutrientes) son con frecuencia (aunque no siempre) pobres en diversidad de especies (Huston, 1994). A pesar de sus altas tasas de lluvia, grandes extensiones de selvas tropicales son cada vez más propensas a incendios forestales como consecuencia de la deforestación y el calentamiento global. En el futuro, la dispersión de los OGM y su potencial para un flujo genético descontrolado con los cultivos nativos (resultado en parte de mecanismos eficientes de dispersión, como la anemocoria) puede reducir la agrodiversidad (Altieri, 2004; Burney, 1995/1996; Pilson y Prendeville, 2004). Pero el impacto humano en el ambiente es muy variable. Los ecólogos históricos reconocen que cada paisaje necesita comprenderse en términos de sus influencias culturales e históricas específicas en la sucesión sin prejuicios hacia la naturaleza humana. Los ecólogos reconocen dos tipos básicos de sucesión: primaria y secundaria. La sucesión primaria se refiere a la colonización inicial de un sustrato que no contenía forma de vida alguna antes, como la sucesión de organismos en los atolones volcánicos o las islas deltaicas emergentes sobre las barras de puntos de los ríos serpenteantes. En una escala de tiempo mayor, otro ejemplo de la sucesión primaria sería la sucesión de organismos en áreas de antigua glaciación, como también sería el reemplazo de filos enteros por nuevos a lo largo de millones de años (Huston, 1994). En cambio, la sucesión secundaria se refiere a la sustitución de organismos por otro tipo de organismos (por ejemplo, organismos seleccionados por K, por organismos seleccionados por r) sobre un sustrato ya perturbado, como en el caso de tierras boscosas bien drenadas cuando están sujetas a los huracanes, tornados, sequías, cizalladura del viento, y, el caso más estudiado en los trópicos, la perturbación humana por agricultura itinerante o alguna otra forma de agricultura extensiva. En todos los casos, tanto en la teoría de sistemas como en la ecología cultural, la idea central es que, después de la perturbación,

la sucesión de agrupaciones de organismos procede de nuevo: en el caso de los bosques tropicales, por ejemplo, la sucesión procede de la dominación por especies seleccionadas por r hacia el clímax, la dominación y la más alta diversidad de lo que son básicamente comunidades seleccionadas por K. Esta es la comunidad clímax, un concepto de sistemas ecológicos que data de principios del siglo XX (Huston, 1994). Aunque la teoría del equilibrio tiene muchos defensores (Lomolino, 2000), cada vez más ecologistas reconocen la perturbación no como un agente foráneo del cambio en un ecosistema, sino como una parte básica de la función y el mantenimiento de la diversidad (Botkin, 1990; Huston, 1994; Perry y Amaranthus, 1997; Petraitis *et al*., 1989; Smith y Wishnie, 2000). La perturbación que pronostican no sería la eliminación de muchas agrupaciones de especies (perturbación altamente intensa), sino una perturbación continua de menor escala, llamada perturbación intermedia, como el fuego de difusión o la caída ocasional de árboles en un bosque, sin la cual tal vez no se puede comprender a plenitud la diversidad local (Figura 1).

Figura. 1. Modelo simplificado de la hipótesis de perturbación intermedia. Tomado de Myers y Bazely, 2003.



La perturbación intermedia (mediante la quema voluntaria, cultivo de árboles, asentamientos y enriquecimiento de suelos) se ha visto como responsable de la creación de islas de bosque en África Occidental (Fairhead y Leach, 1996; Leach y Fairhead, 2000). La evidencia de Sierra Leona indica que la explotación de recursos y el uso de tierras han variado a lo largo del tiempo, como también ha ocurrido con los usos de pastizales en el sur de África (Beinart y Coates, 1995; Beinart y McGregor, 2003), con el uso en el pasado de sitios dentro del bosque para fortalezas, la conversión de bosques a carbón vegetal para la fundición de hierro y la adopción de nuevos cultivos comerciales (como los cacahuates). Tales permutaciones de la sociedad explican la composición y ecología actual de los bosques (Nyerges, 1997; Scoones, 1999; Rudel, 2002). La evidencia de Namibia y Angola indica que las actividades de los reinos históricos de finales del siglo XX expandieron la frontera de huertas de palma, marula, ciruela pájaro, higo y baobab a expensas de la sabana (Kreike, 2003). La variación en las características del paisaje puede estar condicionada por cambios en la complejidad política. La sábana parece ser a veces el resultado de la elección humana (Erickson, 2006; Scoones, 1999). La perturbación intermedia mediante la quema controlada en las sabanas africanas, los *cerrados* de Brasil y los llanos de mojos de Bolivia parecen promover la coexistencia de árboles y pastos al incrementar la heterogeneidad de los paisajes (Erickson, 2006; Jeltsch *et al*., 1998; Mistry *et al*., 2005). La heterogeneidad de paisajes induce efectos de margen que pueden reducir la diversidad de especies que necesitan bosques para criar, anidar y reproducirse (Renfrew *et al*., 2005), pero a veces la fragmentación del hábitat provoca incrementos netos de diversidad (Fahrig, 2003). Puntos de vista opuestos sostienen que las islas de bosque tropical en paisajes dominados por especies de sabana son reliquias del Pleistoceno, razón por la cual deben ser protegidos de la perturbación humana, la supuesta causa del proceso de sabanización, aunque los mecanismos de sucesión antropogénica han sido asociados con la diversidad local estructural y de especies (Dove, 2001; Fairhead y Leach, 1996; Kreike, 2003; Leach y Fairhead, 2000).

La perturbación intermedia a la escala humana involucra la sustitución parcial de las especies de una naturaleza episódica o cíclica en pequeñas

parcelas de tierra, a veces tan pequeñas como los huecos de luz producidos por la caída de árboles o tan grandes como veinte hectáreas, frente a perturbaciones como la tala rasa, deforestación, tala selectiva, inundaciones y eutrofización. La perturbación intermedia no connota la intensificación, la industrialización o la globalización que puede resultar en una diversidad de especies por unidad de tierra disminuida por sobreuso, fertilización y erosión. Los efectos medibles de la perturbación intermedia mediados por humanos refieren como mínimo a uno de los tres tipos de diversidad de especies reconocidos en la ecología, la diversidad alfa. La diversidad alfa es el número de especies en un lugar restringido con parámetros ambientales constantes (como drenaje y tipo de suelo). La perturbación intermedia mediada por humanos también podría verse en la diversidad beta, que es la diversidad sobre un entorno como una pendiente o la Lluvia, que involucra la distancia entre parcelas previamente señaladas por la diversidad alfa (Campbell *et al*., 2006; Erickson y Balée, 2006; Huston, 1994). El tercer tipo de diversidad, la gamma, es la diversidad de toda una región, como la cuenca del Amazonas. En lo que respecta a la cuenca del Amazonas, la mayoría de la diversidad de especies es anterior al Pleistoceno (Bush, 1994; Vieira *et al*., 2001), las sociedades prehistóricas y coloniales pudieron causar un impacto insignificante, excepto por la introducción de especies invasivas (invasiones biológicas). Estas especies ocurrieron en proporcionalidad inversa a la diversidad de especies preexistentes en las localidades de introducción. La diversidad gamma de Amazonia carece de una explicación única y sencilla (Bush, 1994); requiere en cambio un modelo complejo, arraigado en la ecología histórica, capaz no solo de tomar en cuenta los factores físicos y temporales de diversas dimensiones, sino también aquellos mediados por humanos que impactan en los paisajes a lo largo del tiempo. El concepto de la sucesión ecológica, originalmente empleado en la teoría de sistema y la teoría del equilibrio, sigue siendo útil en un modelo dinámico de cambio ambiental que involucra aumentos y disminuciones de la diversidad biológica (Huston, 1994), el enfoque principal de la investigación en la ecología, pero por razones diferentes que en la ecología de sistemas. La sucesión ecológica en la ecología histórica podría llamarse transformación del paisaje (sucesión antropogénica), de los cuales existen varios tipos.

Los impactos humanos directos pueden ser cualitativamente asignados a una escala sensible al tiempo y al lugar, indicativo de mínima perturbación (por ej. caza o recolección prehistórica en el Ártico, la *puna* de los Andes y el desierto de la Gran Cuenca), donde una huella humana mínima permanece en el paisaje desde ese tiempo, a la perturbación máxima (por ej. la agricultura industrial avanzada y la globalización), donde las trazas prehistóricas están en su mayoría borradas como consecuencia del reemplazo completo de agrupaciones de especies y el uso intensivo de tierras, bajo la influencia de una demanda global de mano de obra y mercancías agrícolas (Kates *et al*., 1990; Rudel, 2002). La intensidad de los impactos humanos en los paisajes puede ser proporcionalmente inversa a su diversidad de especies (Burney, 1995/1996), a pesar de las reglas que gobiernan el acceso a los recursos comunes del paisaje (Alvard y Kuznar, 2001; Holt, 2005; Smith y Wishnie, 2000). La hipótesis implícita en esta conclusión es que donde la perturbación mediada por humanos tiene menor intensidad, la diversidad de especies sería la más alta.

Ese punto de vista es una premisa de las áreas silvestres. Hay analogías occidentales para las arboledas sagradas (Russell, 1997), y su desarrollo a lo largo del tiempo ha afectado pasivamente la distribución y comportamiento de especies en el paisaje, por ejemplo, convirtiendo animales de caza en vida silvestre protegida (Beinart y Coates, 1995). Las arboledas sagradas tienen historias independientes en África subsahariana, Asia oriental y meridional y Mesoamérica (Byers *et al*., 2001; Gómez-Pompa *et al*., 1990; Russell, 1997), y su función es proteger la diversidad biótica. Sin arboledas sagradas y áreas silvestres, las perturbaciones pueden reducir la diversidad, en especial si los paisajes no son heterogéneos *in situ* (Turner, 2005; Renfrew *et al*., 2005). En otras palabras, para conservar la diversidad, las arboledas sagradas en contextos culturales diversos sugieren una creencia popular en que la perturbación mediada por humanos debe ser excluida. En última instancia, la perturbación humana del ambiente es escalar y temporal (Allenby, 2000; Balée, 1998b; Crumley, 2001; Erickson, 2000; Hayashida, 2005; Peterson y Parker, 1998; Sheuyange *et al*., 2005) y no en su génesis sociobiológica.

La perturbación mediada por humanos de ciertos paisajes boscosos tropicales en la prehistoria puede haber disminuido la diversidad alfa o no haber tenido ningún efecto medible. Utilizando el índice de biodiversidad Shannon-Weaver, Lentz *et al*. (2002) descubrieron que los bosques antropogénicos producidos por la agricultura antigua maya en Belice no contribuyeron al aumento de la biodiversidad, aunque la composición del bosque es esencialmente antropogénica en las parcelas de investigación (Campbell *et al*., 2006; Gómez-Pompa *et al*., 1987; Wiseman, 1978). En cambio, Lentz *et al*. (2002) no muestran una reducción en la diversidad alfa o beta como resultado del impacto humano porque los inventarios de referencia prehistóricos de todos los taxones no están disponibles. La perturbación mediada por humanos en las tierras bajas de Mesoamérica en el transcurso del tiempo parece haber resultado en bosques dominados por unas pocas especies [en términos de su biomasa relativa y otros componentes (por ej., densidad relativa y frecuencia) de importancia ecológica]. Estas agrupaciones de especies dominantes son conocidas como oligarquías (Campbell *et al*., 2006; Peters *et al*., 1989).

Los bosques oligárquicos (poblados por lo común con árboles de frutas y otras plantas económicas) contrastan con las arboledas sagradas u otros bosques relativamente inalterados que existen en áreas utilizadas por sociedades tradicionales al punto que los patrones tradicionales de perturbación mediada por humanos que involucran en específico quema voluntaria resultan en un mosaico de paisajes. Trabajos recientes sugieren que estos mosaicos —la heterogeneidad de paisajes— tienden a incrementar no solo la densidad de la vida silvestre, sino la diversidad beta de flora y fauna. La perturbación intermedia causada por sociedades tradicionales que emplean la quema voluntaria en Australia, África y los neotrópicos ha dado lugar al aumento de la diversidad alfa de la vegetación (Bird *et al*., 2005; Lunt y Spooner, 2005; Mistry *et al*., 2005; Pyne, 1998; Sheuyange *et al*., 2005). En otras palabras, en estos ejemplos, la perturbación intermedia mediada por humanos y el manejo de las biotas de bosque tropical puede resultar esencial en la explicación de su conservación *in situ*. En ciertos contextos socioeconómicos el *Homo sapiens*, con sus estrategias de uso de la tierra históricamente determinadas, puede comportarse como una especie clave de

la cual depende la diversidad de paisajes enteros (Balée y Erickson, 2006b; Denevan, 2001; Erickson y Balée, 2006; Mann, 2002; Storm, 2002).

La transformación de paisajes primarios y secundarios en Amazonía

La transformación de paisajes primarios en la cuenca baja del Amazonas involucró la construcción de montículos y también cambios en el curso de los ríos para facilitar el transporte, pero aparentemente con efectos insignificantes en la diversidad de especies (Neves y Petersen, 2006; Raffles, 2002). Los efectos, si tuvieron lugar, son desconocidos en la diversidad alfa y beta de la manipulación de suelos y drenaje en el Alto Xingú (Amazonia Baja) alrededor del año 1000 d.C. (Heckenberger *et al*., 2003), así como en otras áreas de tierra oscura el Amazonas (suelos antropogénicos) (Erickson, 2003). Aumentos en la diversidad alfa de flora y la fauna mediante el manejo de recursos y usos indígenas, sin embargo, se han reportado en numerosos ambientes de los neotrópicos (Balée, 1993; Fedick, 1995; Politis, 2001; Posey, 1985; Rival, 2002; Stahl, 2000; Zent y Zent, 2004). Los paisajes de los indios ka'apor, guajá y los tembé del pre-Amazonas (al extremo este del Amazonas, de aproximadamente 10 000 km^2) incluyen bosques altos (relativamente intactos) y antiguos bosques de barbecho de perturbación indígena intermedia, de hace aproximadamente entre 40 a 150 años atrás (Myers y Bazely, 2003). Los antiguos bosques en barbecho ejemplifican la sucesión secundaria antropogénica.

Los inventarios forestales (completados utilizando los procedimientos de inventario biológico estándar como discuten Campbell *et al*., 2006) de cuatro hectáreas de barbecho antiguo y cuatro hectáreas de bosque alto a lo largo de pre-Amazonia demuestra que: a) las mediciones de la diversidad alfa de árboles de bosque de barbecho y bosque alto no diferían mucho entre sí; b) las parcelas adyacentes de bosque alto y bosque de barbecho compartían solo la mitad del número de especies dentro de las parcelas del inventario de cualquiera de los dos tipos sin tener en cuenta la distancia entre aquellas parcelas en la misma categoría, y c) el efecto es una ganancia neta en la diversidad alfa y beta, la segunda involucrando

el gradiente del tiempo (Huston, 1994), el bosque alto siendo más antiguo que los bosques de barbecho (Balée, 1993; Balée, 1998b).

Los bosques secundarios no están necesariamente más empobrecidos en diversidad que los bosques primarios (Schulze *et al*., 2004). Aun cuando los suelos en muchos bosques secundarios son significativamente más fértiles que los de los bosques primarios (Denevan, 2001; 2006; Erickson, 2003; Erickson y Balée, 2006; Neves y Petersen, 2006), no se ha reportado que los suelos del bosque secundario hayan sufrido la paradoja de la fertilización. El hábitat de los indios sirionó de la Amazonia boliviana abarca un paisaje heterogéneo de bosques bien drenados encima de montículos antiguos, bosques un tanto inundados en la base de estos montículos (llamado bosque de pampa) y sabana inundada estacional y pobremente drenada, que representan cerca de dos terceras partes del paisaje (Erikson, 2003; 2006; Erickson y Balée, 2006; Townsend, 1996). Los bosques de montículos son todos antropogénicos y datan de aproximadamente 500 a 1.000 años desde su construcción y habitación continua; los bosques de pampa también son antropogénicos, artefactos de la construcción de los montículos. Dos inventarios de una hectárea cada uno, el primero de un bosque de montículo de 18 metros de altura, y el otro de un bosque de pampa cercano, mostraron (a) similitud en el número de especies, 55 en el bosque de montículo y 53 en el bosque de pampa; (b) 24 especies compartidas entre los dos bosques (un porcentaje alto comparado con la pre-Amazonia); (c) un número total de especies en los dos bosques de 84 [(55+53)-(24)=84]; (d) un dominio de oligarquías en los dos tipos de bosque (las 10 especies más importantes ecológicamente en el inventario del montículo constituyen 65.4% de los valores de importancia de todos los árboles en la parcela, y los primeros 10 en el inventario de la pampa equivalen a 70.9% de todos los valores de importancia en esa parcela). Las oligarquías, sin embargo, son algo diferentes (con una especie de palma con un valor de importancia de 46.21 en el montículo y 9.21 en la pampa, y otra especie de palma con un valor de importancia de 41.2 en el montículo y 83.27 en la pampa), quizá resultado de la pendiente (Erickson y Balée, 2006). Las sabanas son el paisaje original más antiguo, y se mantienen con la quema periódica (Erickson, 2006). Las inundaciones ocurren en

la sabana cada año, y se alternan con una estación seca muy marcada. El número total de especies de plantas vasculares en la sabana es menor a 20 (Townsend, 1996); los juncos y los pastos son los más dominantes. La principal transformación del paisaje que se produjo en el Complejo del Montículo de Ibibate (el montículo y el bosque pampeano adyacente) sería, en términos ecológicos, una sucesión primaria, aunque ese término normalmente excluye la antropogénesis del paisaje (Huston, 1994). La transformación supuso una sustitución radical de las especies de la sabana por árboles intolerantes a la inundación, y con una diversidad alfa de varios órdenes de magnitud mayor que en la sabana. Montículos comparables, en específico, conchas prehistóricas (incluyendo gasterópodos y bivalvos de muchas especies diferentes) en el suroeste de la Florida y el sureste de Luisiana, que presentan una diversidad mayor que las ciénagas cercanas, sin importar los niveles de salinidad, ofrecen aumentos de diversidad alfa mediados por humanos (Kidder, 1998; Marquardt, 1992). Por tanto, la ecología de bosques en estos casos de sucesión primaria sin causas naturales es de hecho un artefacto de la cultura y la sociedad.

Quizá para representar mejor y poder distinguir el impacto de la perturbación mediada por humanos en el ambiente, y dado que es de carácter escalar y temporal (Peterson y Parker, 1998; Sheuyang *et al*., 2005), es necesario referirse a la transformación primaria y secundaria del paisaje cuando se evidencian cambios bióticos y ambientales en una escala humana de tiempo. En otras palabras, la diversidad alfa y beta es sensible al análisis en los tres modos de tiempo histórico (Braudel, 1980) y son, en consecuencia, el material definitivo de la ecología histórica.

Especies invasivas e historias de paisajes

Las invasiones biológicas a veces solo hacen referencia a las especies invasivas que reemplazan (de manera normal) a unas especies estructuralmente similares en el nuevo ambiente, pero aquí el término hace alusión tanto a las especies invasivas en el sentido convencional como a las enfermedades invasivas (Turner, 2005), incluyendo las infecciones bacterianas, protozoarias, virales y priónicas, que pueden asumir caracte-

rísticas epidémicas en relación con flora y fauna nativa no expuesta antes, incluyendo los humanos (Tabla 1). La integración de la ecología del paisaje y la epidemiología (Turner, 2005) resulta análoga al reconocimiento en la ecología histórica a que la actividad humana ha sido asociada con una variedad de patógenos nuevos y su distribución, y que la organización política de las sociedades humanas refleja susceptibilidad a la enfermedad epidémica, además de su potencial para generar invasiones biológicas en ambientes nuevos (Newson, 1998).

Las invasiones biológicas que involucran la transferencia y difusión de especies invasivas de un punto hacia otro han sido denominadas sucesión en acción (Myers y Bazely, 2003). Las especies invasoras son especies introducidas (exóticas) de plantas y animales que se han convertido en malezas que suplantan la flora y fauna nativa existente. Las definiciones varían, pero por lo regular los organismos maleza se consideran "fuera de lugar", se multiplican y difunden rápido a expensas de otros organismos (Crosby, 2004; Myers y Bazely, 2003). Solo una minoría de las especies introducidas se hacen invasivas. El éxito de las especies invasivas, como las malezas, depende de factores bióticos e históricos, en solitario o combinados, y son específicos para cada caso. La especie invasiva puede no tener enemigos naturales en el lugar de la introducción (como en el caso del árbol de caucho brasileño en Malasia), una idea originalmente propuesta por Darwin (Hierro *et al*., 2005), o pueden llenar un nicho vacío en el lugar de introducción (Hierro *et al*., 2005). Pueden presentar un mayor número de cromosomas duplicados (como los tetraploides), que les otorgan mayor éxito reproductivo, como en el caso de todas las especies invasivas de pastos de Europa en América del Norte (Myers y Bazely, 2003). Estructuralmente, las especies invasivas suelen ser, más que en forma de árbol, ruderales (Hierro *et al*., 2005; Huston, 1994), pero existen muchas excepciones. Pueden desprender metabolitos que resultan tóxicos para la biota nativa, pero no para otros en su lugar de origen (Hierro *et al*., 2005). Las especies invasivas pueden haber coexistido con los humanos por más tiempo que las especies afectadas (reemplazadas) en el lugar de su introducción y expansión posterior (Burney, 1995/1996; Hierro *et al*., 2005). Finalmente, los propágulos de muchas especies invasivas se ubican

cerca de las vías de navegación en sus puntos de origen y en sus puntos iniciales de dispersión (Hierro *et al*., 2005), por lo cual son fácilmente transportados con frecuencia como lastre (Burney, 1995/1996; Crosby, 2004; Russell, 1997). Las invasiones biológicas desde la aparición de los humanos modernos con frecuencia han ocurrido con agencia histórica; y esas se conocen como invasiones mediadas por humanos (Myers y Bazely, 2003).

Tabla 1. Algunas especies invasoras y enfermedades transmitidas por el ser humano en la actualidad.

Taxón	Nombre común	Origen	Nuevo entorno	Fecha de establecimiento	Uso (si aplica)
Agave sp.	Planta de Century (o Planta de Pita)	México, Suroeste de Estados Unidos	Sur de África	Siglo XX	Cercado
Avian Influenza (H5N1 virus tipo A influenza)	Gripe Aviar	Asia Oriental	?	Inicios del siglo XXI	-
Boiga Irregularis	Serpiente Marrón de Árbol	Pacífico Sur	Guam	1945-1950	-
Casuarina esquisetifolia	Pino Australiano	Australia	Sur de Florida	Inicios del siglo XX	Ruta panorámica Rompevientos
Cerato stomellaulmii	Enfermedad del Olmo Holandés	Europa	Norte de Estados Unidos	Finales del siglo XIX	-
Cryphonectria parasítica	Cancro del Castaño	Europa	Noreste de Estados Unidos	Finales del siglo XIX	-
Melaleuca quinquenervia	Melaleuca	Australia	Sur de Florida	1906	Ornamental
Myobacterium bovis	Tuberculosis Bovina	América del Norte	Sur de África	Finales del siglo XX	-
Myocastor coypus	Nutria	América del sur	Louisiana, Florida	1941	Pelo
Rattus rattus	Rata Negra	Asia vía Europa	América del Norte	Siglo XVI	-
Schinus terebintbifolius	Pimienta Brasileña	Sur de Brasil	Sur de Florida	Siglo XIX	Ornamental
Ulex europeaus	Aulaga (o Tojo)	Europa	Nueva Zelandia	Siglo XIX	-

Fuentes: Beinart y Coates, 1995; Burney, 1995/1996; Caron *et al.*, 2003; Fritts y Rodder, 1998; Hierro *et al.*, 2005; Kidder, 1998; Myers y Bazely, 2003; Russell, 1997; Schmitz *et al.*, 1997; Simberloff, 1997; Simberloff *et al.*, 1997.

Pero nótese que no todas estas invasiones biológicas han sido mediadas por humanos: por ejemplo, debido a sus habilidades superiores para nadar, los hipopótamos, elefantes y venados saltaban de una isla a otra a través del mar abierto durante el Cuaternario (Burney, 1995/1996). Con independencia del agente de transporte, las invasiones biológicas han sido la causa principal de las extirpaciones y extinciones de la flora y fauna nativa (Burney, 1995/1996; Myers y Bazely, 2003; Pimm, 1991) cuando se compara con otras causas como la sobreexplotación (como en el caso de la extinción del perico de Carolina y el alca gigante) y los efectos locales en cascada de la eliminación de especies singularmente importantes (especies clave) de las cuales dependen otras especies.

Las especies invasivas se transportan a menudo de manera accidental (Crosby, 2004; Myers y Bazely, 2003), como en el lastre de los barcos (Crosby, 2004; Myers y Bazely, 2003; Pilson y Prendeville, 2004; Russell, 1997; Simberloff *et al*., 1997), siendo este el caso con las mareas rojas (dinoflagelados tóxicos) (Burney, 1995/1996), un fenómeno que aumentó de manera significativa después de, aproximadamente, el año 1500 (Crosby, 2004). Sin embargo, quizá con la misma frecuencia, las especies invasoras han sido introducidas de forma intencional (antes de que se conocieran sus aspectos invasivos en el nuevo entorno), para cumplir funciones deseadas, como ornamentación, protección contra el viento, caminos apartados escénicos, control de erosión, bardas y alimento de ganado (Beinart y Coates, 1995; Myers y Bazely, 2003; Simberloff *et al*., 1997). En algunos casos, estas especies son indicativas de paisajes habitados y modificados por sociedades humanas en tiempos antiguos, como con el ejemplo del árbol de café de Kentucky, el castaño americano y la calabaza *butternut*, propagados a largas distancias desde su distribución original en la América del Norte prehistórica, y la nuez y el castaño dulce en las Islas Británicas, llevados allí por los romanos en el primer milenio d.C. (Russell, 1997).

La noción restauracionista (y conservacionista) de que las especies nativas *in situ* son superiores y preferibles a las especies introducidas se puede rastrear en el pensamiento europeo del siglo XIX que unió la cultura y las áreas silvestres en un mismo paisaje (Hall, 2005), como el *Naturgarten* alemán (Wolschke-Bulmahn, 2004). Más en específico, con respecto

a la diversidad, las metas de la ecología de restauración que incluyen la erradicación de las especies exóticas se remontan a la antigüedad, con la doctrina de Platón acerca de la deseabilidad de la diversidad de múltiples especies —"el mundo es mejor, cuantas más cosas [vivas] contiene" (Glacken, 1967)— en la medida que se hace más rica la diversidad de especies, mayor es la resiliencia de un área a la invasión biológica (Pimm, 1991; Simberloff, 1997). Además, Platón consideraba que el estado de la naturaleza solo sería abundante cuando es manejado de manera activa por los humanos (Hall, 2005). Estudios recientes de los llamados paisajes arruinados del Mediterráneo sugieren que muchos de estos representan la expansión antropogénica de bosques ricos en diversidad de especies en la región, y no al revés (Grove y Rackham, 2003).

Las invasiones biológicas han causado reducciones y extirpaciones de numerosas especies por medio de mecanismos que incluyen la exclusión competitiva (Burney, 1995/1996; Simberloff, 1997). En el caso de los patógenos introducidos, su éxito solo se mitiga en la medida que una población huésped sobreviva y pueda ser un reservorio para la propagación endémica en el futuro (Newson, 1998). La barrera de especies entre los humanos y otros animales se elimina de manera efectiva por enfermedades antropozoonóticas (el vector humano infecta otros animales), como la tuberculosis, el sarampión y el virus del herpes humano (Karesh y Cook, 2005), y por la pérdida de hábitat [un ejemplo extremo de la fragmentación de hábitat, que en un sentido general no siempre provoca una reducción en la diversidad de especies (Fahrig, 2003)], lo que explica los cambios en la relaciones entre los patógenos y los huéspedes, como la enfermedad crónica de atrofia del venado mulo, el venado de cola blanca y el alce de las Montañas Rocosas (Farnsworth *et al*., 2005). La malaria parece ser tanto zoonótica (el vector como un animal que infecta a los humanos) como antropozoonótico, dada la relación entre el pueblo guajá y sus monos mascota en la Amazonia de Brasil. En específico en este caso, el reservorio para la malaria parece alternarse entre los humanos y los monos (Cormier, 2005). Algunos patógenos desarrollados en el ganado domesticado parecen haber saltado las barreras entre especies varias veces. La tuberculosis bovina (del ganado doméstico) ha infectado bisontes silvestres en Canadá, venados

en Michigan y búfalos del Cabo; leones, leopardos, guepardos, antílopes kudú y babuinos chacma en Sudáfrica (Caron *et al*., 2003; Karesh y Cook, 2005). La influenza aviar (H5N1 tipo A virus de influenza), que tiene la potencialidad de hacerse pandemia, es notable por su alta morbilidad, además de su capacidad de contar con múltiples vectores: aves silvestres, gatos domésticos, grandes felinos, pollos, cerdos y humanos, todos ellos a través de distribuciones e interacciones mediadas por humanos (Normile, 2005). La tembladera (una enfermedad priónica) entre las ovejas superó la barrera de especies y se convirtió en la enfermedad de las vacas locas en el ganado, de la cual una cepa parece haber cruzado la barrera de especies hacia los humanos con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (Karesh y Cook, 2005). La ecología de las enfermedades, en la medida que vincula a los humanos y otras biotas, afecta las distribuciones en los paisajes de ambos, se vuelve más comprensible dentro de la temporalidad de la ecología histórica (Newson, 1998; Turner, 2005).

La morfología y el comportamiento de la biota invasiva puede ser predecible (puede ser tipo maleza, oportunista y genéticamente plástica, con una capacidad para mutar rápido y, en algunos casos, infectar otros organismos y saltar las fronteras de especies), pero no todas las invasiones biológicas necesariamente resultan en reducciones netas de la diversidad alfa, beta, ni siquiera gamma. De hecho, muchas especies-r invadieron los ambientes dominados por especies K antes de iniciarse las migraciones *Homo* fuera de África al inicio del Pleistoceno. En un inicio, los humanos modernos no tenían muchas especies invasivas, con excepción de los piojos de la cabeza y alguna otra, ninguna domesticada, para transportar con ellos (Burney, 1995/1996). La pregunta entonces es cuánto tiempo debe existir una especie en un ambiente dado para dejar de ser considerada como invasiva. Se utiliza una clasificación arbitraria en la silvicultura europea, donde se identifican los arquetipos que existían en el continente antes del 1500 y las neófitas, que son aquellas plantas que llegaron después de 1500; los orígenes de otras especies son simplemente desconocidos, y estas son denominadas como criptogénicas (Myers y Bazely, 2003). De hecho, algunas especies invasivas funcionan como especies clave, e incluso su eliminación no puede causar un retorno al estado 'sin invasión'" (Myers

y Bazely, 2003). Este es quizá el caso con las especies invasivas que han alterado las características estructurales fundamentales de los paisajes, como los árboles de melaleuca, que han formado bosques en Florida donde antes no existían, lo que altera la distribución de numerosas especies de flora y fauna (Schmitz *et al*., 1997; Simberloff, 1997).

Discusión y conclusiones

Sobre la base de la noción de que las especies nativas son más deseables que las exóticas no solo por motivos estéticos, sino para razones relacionadas con la protección de la diversidad biótica, los esfuerzos en la ecología de restauración se han encaminado hacia la eliminación y erradicación de las especies invasivas. Estos esfuerzos han obtenido resultados mixtos. La ecología de restauración (la ecología histórica aplicada) requiere en esencia un conocimiento de las condiciones de referencia del pasado estado del paisaje para lograr la autenticidad (Egan y Howell, 2001b; Hall, 2005; Hayashida, 2005; Higgs, 2003; Jones, 2004).

La ecología histórica puede proporcionar las referencias necesarias para la reconstrucción de paisajes (Egan y Howell, 2001a; 2001b; Hayshida, 2005; Higgs, 2003). Las fuentes varían y pueden derivarse de investigación en paleoecología, etnohistoria, historia y arqueología (Crumley, 1994; 2003; Erickson, 2003; Hayashida, 2005; Heckenberger *et al*., 2003; Kidder, 1998; Turner, 2005); de la etnografía y la etnobiología (Balée, 1993; Posey, 1985; Posey y Balée, 1989; Rival, 2002; Zent y Zent, 2004); del trabajo de inventarios biológicos (Campbell *et al*., 2006; Erickson y Balée, 2006; Turner, 2005), y de la investigación sobre símbolos y lenguaje. Los paisajes, como jardines, comunican significados acerca de sus usuarios y propietarios en los Andes Peruanos (Finerman y Sackett, 2003). El conocimiento de los cultígenos arcaicos se conserva en la memoria y se emplea en rituales en Borneo y otros lugares del sudeste asiático (Dove, 1999). El lenguaje cataloga los estados pasados de los paisajes mediante términos topográficos actuales (Russell, 1997); también encarna los métodos pasados de explotación de los recursos, como la agricultura en África ecuatorial prehistórica, reconstruida por medio del estudio histórico-lingüístico

de las lenguas actuales bantu (Vansina, 1990). El lenguaje conserva las evidencias de la valoración económica de especies y paisajes, como en el ciclo de exportación del cacao de la Amazonia en el siglo XVIII, que se ve reflejado en el préstamo indígena de un término no nativo para el cacao, aunque el árbol es nativo de la región (Balée, 2003). Los cambios en la biota representan una cronología de la transformación del paisaje inscrita en el vocabulario como la modificación, en muchas lenguas mesoamericanas, del nombre de la oveja, para el nombre original del venado de cola blanca, un animal nativo del bosque, cada vez más extraño como resultado de la invasión de pastos para el pastoreo de ovejas, y viceversa (Witkowski y Brown, 1983). La ecología histórica es interdisciplinaria, y en una de sus disciplinas, la antropología, es claramente intersubdisciplinaria.

La ecología histórica aplicada puede convertirse en la colaboración holística de conocimiento derivado de disciplinas diversas para el beneficio de las sociedades humanas, la biota y los paisajes seleccionados. Se deriva de varios campos con el objetivo de determinar las condiciones de referencia de los paisajes del pasado con el más alto grado de autenticidad para el periodo elegido para la restauración. El problema restante, en términos de las aplicaciones de la ecología histórica, tiene que ver con las cuestiones políticas de quien se privilegia para poder determinar la profundidad temporal deseada (Higgs, 2003; Jones, 2004) y el estado asociado de conocimiento histórico (Anderson, 2001; Hall, 2005) acerca de los paisajes para restaurar.

Reconocimientos

Por su útil discusión y sugerencia de referencias, estoy en deuda con David Campbell, Clark L. Erickson y Charbel Niño El-Hani. Por su ayuda bibliográfica inicial, doy las gracias a Nathalie Dajko. Agradezco al personal de la biblioteca y a la División de Ecología de la Florida Gulf Coast University, por poner a mi disposición recursos bibliográficos durante los meses en que las bibliotecas de la Universidad de Tulane se mantenían cerradas como consecuencia del huracán Katrina.

Referencias[2]

Adams, W. Y. 1998. *The philosophical roots of anthropology*. Center for the Study of Language and Information.

Alexander, K. N. A. y J. E. Butler. 2004. Is the US concept of 'old growth' relevant to the cultural landscapes of Europe? A UK perspective. See Honnay *et al*., 233-246.

Allenby, B. R. 2000. The fallacy of "green technology". *American Behavioral Scientist*, *44*: 213-28.

Altieri, M. A. 2004. *Genetic engineering in agriculture: the myths, environmental risks, and alternatives.* Food First Books.

Alvard, M.S. y L. Kuznar. 2001. Deferred harvests: the transition from hunting to animal husbandry. *American Anthropologist*, *103*, 295-311.

Anderson, M. K. 1999. The fire, pruning, and coppice management of temperate ecosystems for basketry material by California indian tribes. *Human Ecology, 27*, 79-113.

Anderson, M. Kat. 2001. The contribution of ethnobiology to the reconstruction and restoration of historic ecosystems. In D. Egan & E. A. Howell (Eds.), *The historical ecology handbook: A restorationist's guide to reference ecosystems* (55–72). Island Press.

Balée, William. (1989). The culture of Amazonian forests. In D. A. Posey & W. Balée (Eds.), *Resource Management in Amazonia: Indigenous and Folk Strategies* (1–21).

Balée, W. 1993. Indigenous transformation of Amazonian forests: an example from Maranhão Brazil. *Homme*, *33*, 231-54.

Balée, W. (ed.). 1998a. *Advances in historical ecology*. Columbia University Press.

2 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse a un patrón de formato APA y se han complementado con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que pueden diferir de la lista de referencias del artículo original. Asimismo, cabe señalar que cierta información no se localizó o presenta posibles omisiones del propio texto de origen, por lo que no fue posible actualizarlas en su totalidad.

Balée W. 1998b. Historical ecology: premises and postulates. En W. Balée, *Historial ecology* (13-29). Columbia University Press.

Balée, W. 2000. Antiquity of traditional ethnobiological knowledge in Amazonia: the Tupí-guaraní family and time. *Ethnohistory*, *47*, 399-422.

Balée W. 2003. Historical-ecological influences on the word for cacao in Ka'apor. *Anthropological Linguistics, 45*, 259-80.

Balée, W. y D. G. Campbell. 1990. Evidence for the successional status of liana forest (Xingu River basin, Amazonian Brazil). *Biotropica*, *22*, 36-47.

Balée, W. y C. Erickson. 2006a. *Time and complexity in historical ecology: studies in the neotropical lowlands.* Columbia University Press.

Balée, W. y C. Erickson. 2006b. Time, complexity, and historical ecology. En William Balée y Clark Erickson (eds.). *Time and complexity in historical ecology: studies in the neotropical lowlands* (1-20). Columbia University Press.

Beinart, W. y P. Coates. 1995. *Environment and history: the taming of nature in the USA and Southern Africa*. Routledge.

Beinart, W. y J. McGregor. 2003. *Social history and African environments*. Ohio University Press.

Biersaack, A. 1999. Introduction: from the "new ecology" to the new ecologies. *American Anthropologist, 101*, 5-18.

Bilsky, L. J. 1980. *Historical ecology: essays on environment and social change*. Kennikat Press.

Bird, D. W., R. B. Bird y C. H. Parker. 2005. Aboriginal burning regimes and hunting strategies in Australia's Western Desert. *Human Ecology, 33*, 443-64.

Boglioli, M. A. 2000. Civil conflict and savage unity: cross-cultural assumptions in ecological anthropology. *Anthropology of Work Review*, *21*, 18-21.

Botkin, D. 1990. *Discordant harmonies: a new ecology for the twenty-first century*. Oxford University Press.

Boyd, R. 1999a. *Indians, fire and the land in the Pacific Northwest*. Oregon State University Press.

Boyd, R. T. (1999b). *Conclusion: Ecological lessons from Northwest Native Americans*. En R. T. Boyd (Ed.), *Indians, fire, and the land in the Pacific Northwest* (292–297). Oregon State University Press.

Braudel, F. 1980. *On history*. Trad. S. Matthews. University of Chicago Press.

Burney, D. A. 1995/1996. Historical perspectives on human-assisted biological invasions. *Evolutionary Anthropology 4*, 216-221.

Bush, M. B. 1994. Amazonian speciation: a necessarily complex model. *Journal of Biogeography 21*, 5-17.

Byers, B.A., R. N. Cunliffe y A. T. Hudak. 2001. Linking the conservation of culture and nature: a case study of sacred forests in Zimbabwe. *Human Ecology* 29, 187-218.

Campbell, D.G., A. Ford, K. S. Lowell, J. Walker, J. K. Lake *et al*. 2006. The feral forests of the Eastern Peténn. En W. L. Balée y C. L. Erickson (eds.). *Time and complexity in historical ecology* (21-56). Columbia University Press.

Caron, P. C., A. Caron y J. T. DuToit. 2003. Ecological implications of bovine tuberculosis in African buffalo herds. *Ecological Applications 13*, 1338-1345.

Clement, C. R. 1999a. 1492 and the loss of Amazonian crop genetic resources. I. The relation between domestication and human population decline. *Economic Botany 53*, 188-202.

Clement, C. R. 1999b. 1492 and the loss of Amazonian crop genetic resources II. Crop biogeography at contact. *Economic Botany 53*. 203-216.

Cole, J. W. y E. R. Wolf. 1974. *The hidden frontier: ecology and ethnicity in an Alpine Valley*. Academics.

Cormier, L. A. 2003. *Kinship with monkeys: the Guaja foragers of Eastern Amazonia*. Columbia Univ. Press.

Cormier, L. A. 2005. Um aroma no ar: a ecología histórica das plantas anti-fantasma entre os Guajá da Amazônia. *Mana*, *11*, 129-54.

Cronon, W. 1983. *Changes in the land: Indians, colonists, and the ecology of New England*. Hill & Wang.

Crosby, A. W. 2004. *Ecological imperialism: the biological expansion of Europe, 900-1900.* Cambridge University Press.

Crumley C. 1994. *Historical ecology: cultural knowledge and changing landscapes*. School of Am. Res. Press.

Crumley, Carole. 1998. "Foreword." En *Advances in Historical Ecology*, editado por William Balée, IX-XIV. New York: Columbia University Press.

Crumley, C. 2001. Introducción. En C. Crumley (ed.). *New directions in anthropology and environment* (VII-XI). Altamira Press.

Crumley C. 2003. Historical ecology: integrated thinking at multiple temporal and spatial scales [ponencia]. *World Systems History and Global Environmental Change Conference*, Lund University, Sweden. http://www.humecol.lu.selwoshglec/

Denevan, W. M. 1992. The pristine myth: the landscape of the Americas in 1492. *Annals of the Association of American Geographers 82*, 369-85.

Denevan, W. M. 2001. *Cultivated landscapes of native Amazonia and the Andes*. Oxford University Press.

Denevan WM. 2006. Pre-European forest cultivation in Amazonia. See Balée & Erickson 2006a, 153–63 [3]

Dickinson, W. R. 2000. Changing times: the Holocene legacy. *Environmental History 5*, 483-502.

3 N. de T. Esta referencia no está completa. Es una omisión de origen.

Doolittle, W. F. 2000. *Cultivated landscapes of native North America*. Oxford University Press.

Dove, M. R. 1999. The agronomy of memory and the memory of agronomy: ritual conservation of archaic cultigens in contemporary farming systems. En V. Nazare (ed.). *Ethnoecology: Situated Knowledge/ Located Lives* (45-70). University of Arizona Press

Dove, M. R. 2001. Interdisciplinary borrowing in environmental anthropology and the critique of modern science. En C. L. Crumley (ed.). *New directions in anthropology and environment* (90-110). Altamira Press

Egan, D. y E. A. Howell. 2001a. *The historical ecology handbook: a restorationist's guide to reference ecosystems*. Island Press.

Egan, D. y E. A. Howell. 2001b. *Introduction*. En D. Egan y E. A. Howell, *The historical ecology handbook: a restorationist's guide to reference ecosystems* (1-23). Island Press.

Erickson, C. L. 2000. An artificial landscape-scale fishery in the Bolivian Amazon. *Nature*, *408*, 190-93.

Erickson, C. L. 2003. Historical ecology and future explorations. En J. Lehmann, D. C. Kern, B. Glaser y W. I. Woods (ed.). *Amazonian dark earths: origin, properties, management* (455-500). Kluwer.

Erickson, C. L. 2006. "The Domesticated Landscapes of the Bolivian Amazon." En Time and Complexity in Historical Ecology: Studies in the Neotropical Lowlands, editado por W. Balee y C. L. Erickson, 235–78. New York: Columbia University Press.

Erickson, C. L., y W. Balée. 2006. "The Historical Ecology of a Complex Landscape in Bolivia." En Time and Complexity in Historical Ecology: Studies in the Neotropical Lowlands, editado por W. Balée y C. L. Erickson, 187–233. New York: Columbia University Press.

Fahrig, L. 2003. Effects of habitat fragmentation in biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, *34*, 487-515.

Fairhead, J. y M. Leach. 1996. *Misreading the African landscape: society and ecology in a forest-savanna mosaic*. Cambridge University Press.

Farnsworth, M. L., L. L. Wolfe, N. T. Hobbs, K. P. Burnham, y E. S. Williams, et al. 2005. "Human Land Use Influences Chronic Wasting Disease in Mule Deer." *Ecological Applications* 15: 119–126.

Fedick, S. L. 1995. "Indigenous Agriculture in the Americas". *Journal of Archaeological Research* 3: 257–303.

Feely-Harnik, G. 2001. Ravenala madagascariensis: the historical ecology of a "flagship species" in Madagascar. *Ethnohistory*, *48*, 31-86.

Finerman, R., y R. Sackett. 2003. "Using Home Gardens to Decipher Health and Healing in the Andes." *Medical Anthropology Quarterly* 17: 459–482.

Forman, R. T. T. y M. Godron. 1986. *Landscape ecology*. Wiley & Sons.

Foster D., G. Motzkin G., J. O'Keefe, E. Boose y D. Orwig. 2004. The environmental and human history of New England. En D. Foster y J. D. Aber (eds.). *Forests in time: the environmental consequences of 1,000 years of change in New England* (43-100). Yale University Press.

Fritts, T. H., y G. H. Rodder. 1998. "The Role of Introduced Species in the Degradation of Island Ecosystems: A Case History of Guam" *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 35: 149–174.

Glacken, C. J. 1967. *Traces on the Rhodian shore: nature and culture in western thought from ancient times to the end of the eighteenth century*. University of California Press.

Gómez-Pompa, A. y A. Kraus. 1992. Taming the wilderness myth. *Bioscience*, *42*, 271-279.

Gómez-Pompa, A., J. S. Flores y V. Sosa. 1987. The "pet-kot": a man-made tropical forest of the Maya. *Interciencia*, *12*, 10-15.

Gómez-Pompa, A., J. Salvador Flores, y M. Alphat Fernández. 1990. "The Sacred Cacao Groves of the Maya." *Latin American Antiquity* 1: 247–257.

Grove, A. T. y O. Rackham. 2003. *The nature of Mediterranean Europe: an ecological history*. Yale University Press.

Gunn, J. 1994. Introduction: a perspective from the humanities-science boundary. *Human Ecology 22*, 1-22.

Hall, M. 2005. *Earth repair: a transatlantic history of environmental restoration*. Charlottesville: University of Virginia Press.

Hayashida F. M. 2005. Archaeology, ecological history, and conservation. *Annual Review of Anthropology* 34: 43–65.

Headland, T. N. 1997. Revisionism in ecological anthropology. *Current Anthropology* 38: 605–630.

Heckenberger, M. J., A. Kuikuro, U. T. Kuikuro, J. C. Russell, M. Schmidt *et al*. 2003. Amazonia 1492: pristine forest or cultural parkland? *Science*, *301*, 1710-1714.

Hierro, J. L., J. L. Maron y R. Callaway. 2005. A biogeographical approach to invasions: the importance of studying exotics in the introduced and native range. *Journal of Ecology* 93: 5–15.

Higgs, E. 2003. *Nature by design: people, natural process, and ecological restoration*. MIT Press.

Hirsch, E. y M. O'Haulon (eds.). 1995. *The anthropology of landscape: perspectives on place and space*. Clarendon Press.

Holt, F. L. 2005. The catch-22 of conservation: indigenous peoples, biologists, and cultural change. *Human Ecology* 33: 199–215.

Honnay O., K. Verheyen, B. Bossuyt y M. Hermy. 2004. *Forest biodiversity: lessons from history for conservation. IUFRO Research Series, 10*. CABI.

Hughes, J. D. 1975. *Ecology in ancient civilizations*. University of New Mexico Press.

Hughes, J. D. 2001. *An environmental history of the world: humankind's changing role in the community of life*. Routledge

Huston, M. A. 1994. *Biological diversity: the coexistence of species on changing landscapes.* Cambridge University Press.

Ingold, T. 1993. The temporality of the landscape. *World Archaeology* 25: 152–174.

Janzen, D. 1998. Gardenification of wildland nature and the human footprint. *Science*, *279*, 1312-1313.

Jeltsch, F., S. J. Milton, W. R. J. Dean, N. Van Rooyen y K. A. Moloney. 1998. Modelling the impact of small-scale heterogeneities on tree-grass coexistence in semiarid savannas. *Journal of Ecology* 86: 780–793.

Jones, M. E. 2004. Historical ecology for conservation managers. *Conservation Biology* 18: 281–282.

Karesh, W. B. y R. Cook. 2005. The human-animal link. *Foreign Affairs* 84: 38–50.

Kates, R. W., B. L. Turner II y W. C. Clark. 1990. The great transformation. En B. L. Turner II (ed.). *The Earth as transformed by human action: global and regional changes in the biosphere over the past 300 years* (1-17). Cambridge University Press.

Kidder, T. R. 1998. "The Rat That Ate Louisiana: Aspects of Historical Ecology in the Mississippi River Delta." En *Advances in Historical Ecology*, editado por William Balée, 141–168. New York: Columbia University Press.

Kidder, T. R., y W. Balée. 1998. "Epilogue." En Advances in Historical Ecology, editado por W. Balée, 405–410. New York: Columbia University Press.

Kreike, E. 2003. "Hidden Fruits: A Social Ecology of Fruit Trees in Namibia and Angola, 1880s–1990s." En *Social History and the Environment in Southern Africa*, editado por C. Beinart y J. McGregor, 27–42.

Kuhn T. S. 1970. *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press

Lakatos, I. 1980. *The methodology of scientific research programmes. Philosophical Papers, vol. 1*. Cambridge University Press.

Lakatos I. 1999 (1973). The methodology of scientific research programmes. (Linacre lecture#8). In For and Against Method, ed. M Motterlini, 96–109. Chicago: Univ. Chicago Press.

Leach, M. y J. Fairhead. 2000. Challenging neo-Malthusian deforestation analyses in West Africa's dynamic forest landscapes. *Population and Development Review*, *26*, 17-43.

Lentz, D. L., L. Haddad, S. Cherpelis, H. J. M. Joo y M. Potter. 2002. Long-term influences of ancient Maya agroforestry practices on tropical forest biodiversity in Northwestern Belize. En J. R. Stepp, F. S. Wyndham y R. K. Zarger (eds.). *Ethnobiology and Biocultural Diversity* (431–441). Athens: University of Georgia Press.

Lomolino, M. V. 2000. A call for a new paradigm of island biogeography. *Global Ecology and Biogeography* 9: 1–16.

Lunt, I. D. y P. G. Spooner. 2005. Using historical ecology to understand patterns of biodiversity in fragmented agricultural landscapes. *J. Biogeographic*, *32*, 1859-73.

MacArthur, R. H. y E. O. Wilson. 1967. *The theory of island biogeography.* Princeton University Press.

Mann, C. 2002. 1491. *Atlantic Monthly*, *289*, 41-53.

Marquardt, W. H. 1992. *Culture and environment in the domain of the Calusa Institute of Archaeology and Paleoenvironmental Studies. Monograph 1.* University of Florida.

Marquardt, W. H. y C. L. Crumley. 1987. Theoretical issues in the analysis of spatial patterning. En C. L. Crumley y W. H. Marquardt (eds.). *Regional dynamics: burgundian landscapes in historical perspective* (1-18). Academic.

Mistry, J., A. Berardi, V. Andrade, T. Krahô, P. Krahô y O. Leonardos. 2005. Indigenous fire management in the cerrado of Brazil: the case of the Kraho of Tocantins. *Human Ecology* 33: 365–386.

Moran, E. F. 2000. *Human adaptability: an introduction to ecological anthropology*. Westview Press.

Myers, J. H. y D. Bazely. 2003. *Ecology and control of introduced plants*. Cambridge University Press.

Myllyntaus, T. 2001. Environment in explaining history: restoring humans as part of nature. En *Encountering the past in nature: essays in environmental history* (pp. 141-160). Ohio University Press.

Neves, E. G. y J.B. Petersen. 2006. "Political economy and pre-columbian landscape transformations in central amazonia." In *Time and Complexity in Historical Ecology: Studies in the Neotropical Lowlands*, editado por William Balée y Clark L. Erickson, 279–310. Columbia University Press.

Newson, L. A. 1998. "A Historical-Ecological Perspective on Epidemic Disease." En W. Balée (ed.), *Advances in Historical Ecology*, 42–63. New York: Columbia University Press.

Normile, D. 2005. Pandemic influenza: global update. *Science*, *309*, 370-73.

Nyerges, A. E. 1997. *The ecology of practice: studies in food crop production in Sub-Saharan West Africa*. Gordon & Breach.

Olwig, K. 2003. Landscape: the Lowenthal legacy". *Annals of the Association of American Geographers* 93: 871–877.

Parker, E. 1992. Forest islands and Kayapo resource management in Amazonia: a reappraisal of the apêtê. *American Anthropologist* 94: 406–428.

Perry, D. A. y M. P. Amaranthus. 1997. Disturbance, recovery, and stability. En K. A. Kohm y J. F. Franklin (eds.). *Creating a forest for the 21st century: the science of ecosystem management* (31-56). Island Press.

Peters, R. H. 1991. *A critique for ecology*. Cambridge University Press.

Peters, C. M., M. J. Balick, F. Kahn y A. Anderson. 1989. Oligarchic forests of economic plants in Amazonia: utilization and conservation

of an important tropical forest resource. *Conservation Biology* 3: 341–349.

Peterson, D. L. y V. T. Parker. 1998. Dimensions of scale in ecology, resource management, and society. En D. L. Peterson y V. T. Parker (eds.). *Ecological scale: theory and application* (499-522). Columbia Univ. Press.

Petraitis, P. S., R. E. Latham y R. A. Niesenbaum. 1989. The maintenance of species diversity by disturbance. *Quarterly Review of Biology* 64: 393–418.

Pilson, D. y H. R. Prendeville. 2004. Ecological effects of transgenic crops and the escape of transgenes into wild populations. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 35: 149–174.

Pimm, S. L. 1991. *The balance of nature? Ecological issues in the conservation of species and communities*. University of Chicago Press.

Pitzl, G. R. 2004. *Encyclopedia of human geography*. Greenwood.

Politis, G. 2001. Foragers of the Amazon: the last survivors or the first to succeed? En C. McEwan, C. Barreto y E. G. Neves (eds.). *Unknown Amazon: culture in nature in ancient Brazil* (26-49). British Museum Press.

Porro, R. 2005. Palms, pastures, and swidden fields: the grounded political ecology of "agro-extractive/shifting cultivator peasants" in Maranhao, Brazil. *Human Ecology* 33: 17–56.

Posey, D. A. 1985. Indigenous management of tropical forest ecosystems. *Agroforestry Systems*, *3*, 139-158.

Posey, D. A. y W. Balée. 1989. *Resource management in Amazonia: indigenous and folk strategies. advances in economic botany*. New York Botanical Garden.

Pyne, S. J. 1991. *Burning bush: a fire history of Australia*. Henry Holt.

Pyne, S. J. 1998. Forged in fire: history, land, and anthropogenic fire. En W. Balée (ed.), Advances in Historical Ecology, 64-103. New York: Columbia University Press.

Raffles, H. 2002. *In Amazonia: a natural history.* Princeton University Press.

Rappaport, R. A. 2000. *Pigs for the ancestors: ritual in the ecology of a New Guinea people*. Waveland Press.

Redman C. L. 1999. *Human impact on ancient environments*. University of Arizona Press.

Renfrew, R. B., C. A. Ribic y J. L. Nack. 2005. Edge avoidance by nesting grassland birds: a futile strategy in a fragmented landscape. *Auk*, *122*, 618-36.

Rival, L. 2002. *Trekking through history: the Huaorani of Amazonian Ecuador.* Columbia University Press.

Rival, L. 2006. Amazonian historical ecologies. *Journal of the Royal Anthropological Institute 12*, S79-94.

Robbins, W. G. 1999. *Landscape and environment: ecological change in the Intermontane Northwest.* In: Boyd, R. (ed.), *Indians, Fire, and the Land in the Pacific Northwest.* Oregon State University Press, Corvallis, OR, 219–237.

Roger, J. 1997. *Buffon*. Trad. S. L. Bonnefoi. Cornell University Press.

Rudel, T. K. 2002. Paths of destruction and regeneration: globalization and forests in the tropics. *Rural Social*, *67*, 622-636.

Russell, E. 1997. *People and the land through time: linking ecology and history.* Yale University Press.

Sauer, C. O. 1956. The agency of man on the Earth. En W. L. Thomas Jr, C. O. Sauer, M. Bates y L. Mumford (eds.). *Man's role in changing the face of the Earth* (49-69). University of Chicago Press.

Schmitz, D. C., D. Simberloff, R. H. Hofstetter, W. Haller & D. Sutton. 1997. *The ecological impact of nonindigenous plants.* En: D. Simberloff, D. C. Schmitz & T. C. Brown (eds.), *Strangers in Paradise: Impact and Management of Nonindigenous Species in Florida*, 39–61. Washington, D.C.: Island Press.

Schulze, C. H., M. Waltert, P. J. A. Kessler, R. Pitopang, D. Shahabuddin Veddeler, *et al*. 2004. Biodiversity indicator groups of tropical land-use systems: comparing plants, birds, and insects. *Ecological Applications* 14: 1321–33.

Scoones, I. 1999. New ecology and the social sciences: what prospects for a fruitful engagement? *Annual Review of Anthropology* 28: 479–507.

Sheuyange, A., G. Oba y R. B. Weladji. 2005. Effects of anthropogenic fire history on savanna vegetation in northeastern Namibia. *Journal of Environmental Management* 75: 189–98.

Simberloff, D. 1997. "The Biology of Invasions." Pp. 3–17 in *Strangers in Paradise: Impact and Management of Non-indigenous Species in Florida*, edited by D. Simberloff, D. C. Schmitz, and T. C. Brown. Washington, D.C.: Island Press.

Simberloff, D., D. C. Schmitz y T. C. Brown. 1997. *Strangers in paradise: impact and management of nonindigenous species in Florida*. Island Press.

Smith, E. A. y M. Wishnie. 2000. Conservation and subsistence in small-scale societies. *Annual Review of Anthropology* 29: 493–524

Stahl, P. W. 1996. Holocene biodiversity: an archaeological perspective from the Americas. *Annual Review of Anthropology* 25: 105–26.

Stahl, P. W. 2000. Archaeofaunal accumulation, fragmented forests, and anthropogenic landscape mosaics in the tropical lowlands of prehispanic Ecuador. *Latin American Antiquity* 11: 241–257.

Stengers I. 2000 (1993). The Invention of Modern Science. Transl. DW Smith. Minneapolis: Univ. Minn. Press (From French).

Stepp, J. R., F. S. Wyndham y R. K. Zarger. 2002. *Ethnobiology and biocultural diversity*. University of Georgia Press.

Stoffle, R. W., R. Toupal y N. Zedeno. 2003. Landscape, nature, and culture: a diachronic model of human-nature adaptation. En H. Selin (ed.). *Nature across cultures: views of nature and the environment in non-Western cultures* (97-114). Kluwer Academic.

Storm, L. E. 2002. "Patterns and Processes of Indigenous Burning: How to Read Landscape Signatures of Past Human Practices." En *Ethnobiology and Biocultural Diversity*, editado por John R. Stepp, Felice S. Wyndham y Rebecca K. Zarger, 496–508. Athens: University of Georgia Press.

Sutton, M. D. y E. N. Anderson. 2004. *Introduction to cultural ecology*. Altamira Press.

Townsend, W. 1996. *Nyao Itõ: caza y pezca de los sirionó*. Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andres.

Turner, M. G. 2005. Landscape ecology: what is the state of the science?" *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 36: 319–344.

Vansina, J. 1990. *Paths in the rainforests: toward a history of political tradition in Equatorial Africa*. University of Wisconsin Press.

Verheyen, K., O. Honnay, B. Bossuyt y M. Hermy. 2004. "What History Can Teach Us about Present and Future Forest Biodiversity." En *Forest Biodiversity: Lessons from History for Conservation*, editado por O. Honnay, K. Verheyen, B. Bossuyt y M. Hermy, 1–9. Wallingford: CABI Publishing.

Vieira, I. C. G., J. M. Cardoso da Silva, D. C. Oren y M. A. D'Incao. 2001. *Biological and cultural diversity of Amazonia*. Museu Paraense Emílio Goeldi.

Walker, K. J. 2000. Historical ecology of the southeastern longleaf and slash pine flatwoods: a Southwest Florida perspective. *J. Ethnobiol*, *20*, 269-299.

Walker L. R. y R. del Moral. 2003. *Primary succession and ecosystem rehabilitation*. Cambridge University Press.

Winthrop, K. R. 2001. "Historical Ecology: Landscape of Change in the Pacific Northwest." En *New Directions in Anthropology and Environment: Intersections*, editado por Carole L. Crumley, 203–222. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Wiseman, F. J. 1978. Agriculture and historical ecology of the Maya lowlands. En P. D. Harrison y B. L. Turner II (eds.). *Pre-Hispanic Maya agriculture* (63-115). University of New Mexico Press.

Witkowski, S. R. y C. H. Brown. 1983. Marking-reversals and cultural importance. *Language*, *59*, 569-82.

Wolf, E. R. 1982. *Europe and the people without history*. University of California Press.

Wolf, E. R. 1999. Cognizing "cognized models". *American Anthropologist* 101: 19–22.

Wolschke-Bulmahn, J. 2004. All of Germany a garden? Changing ideas of wilderness in German garden design and landscape architecture. En C. Mauch (ed.). *Nature in German history* (74-92). Berghahn Books.

Worster, D. 1993. *The wealth of nature: environmental history and the ecological imagination*. Oxford University Press.

Worster, D. 1994. *Nature's economy: a history of ecological ideas*. Cambridge University Press.

Zent, E. L. y S. Zent. 2004. Amazonian indians as ecological disturbance agents: the Hoti of the Sierra de Maigulaida Venezuelan Guayana". En L. Maffi y T. J. S. Carlson (eds.). *Ethnobotany and conservation of biocultural diversity* (79-111). New York Botanical Garden.

Zimmerer, K. S. 1993. Agricultural biodiversity and peasant rights to subsistence in the Central Andes during Inca rule. *Journal of Historical Geography* 19: 15–32.

Zimmerer K. S. 2000. The reworking of conservation geographies: nonequilibrium landscapes and nature-society hybrids. *Annals of the Association of American Geographers* 90: 356–369.

7. Genealogías de la confusión en la teoría de la propiedad: de las montañas comunales de los Pirineos a los comunes ambientales, políticos y digitales[1]

Ismael Vaccaro y Oriol Beltran

Resumen: El concepto de los comunes (y su derivado, *comunal*) ha dejado de ser un patrimonio casi exclusivo del ámbito de la gestión de los recursos naturales, para convertirse también en un término central de campos como la economía digital o la política alternativa. El uso y difusión de este concepto en contextos tan diversos ha generado una pérdida en la concreción en su empleo. En estos momentos, el término *los comunes* dependiendo de la situación, se utiliza como sinónimo de conceptos tan distintos como *acceso abierto*, *propiedad comunal*, *dominio público*, *bienes públicos* o *recursos comunes*. Tradicionalmente, el estudio de las formas de gestión de la propiedad se ha beneficiado de la colaboración entre dos escuelas analíticas. Por un lado, desde la economía, se han estudiado las características de los recursos para poder predecir las formas más probables de su manejo. Por el otro, desde la antropología y la geografía humana, el esfuerzo analítico se ha centrado en entender las características estructurales de las instituciones (los regímenes de propiedad) concebidas para gestionar esos mismos recursos. El hecho de centrarse en las características de los recursos o en las de las instituciones diseñadas para manejarlos dio lugar al desarrollo de dos conjuntos diferentes de conceptos para referirse a unos mismos procesos, pero desde perspectivas ligeramente distintas. En algunos casos, ambas escuelas han utilizado el mismo concepto para identificar realidades diferentes. Hoy en día la teorización sobre *los comunes*, habitual también en campos como la economía digital o la política alternativa, experimenta una proliferación semántica. En estas páginas reflexionamos sobre la creciente inespecifici-

1 "Genealogías de la confusión en la teoría de la propiedad: de las montañas comunales de los pirineos a los comunes ambientales, políticos y digitales". Publicación inédita.

dad con la que se maneja la noción de lo comunal. Como ejemplo, se ofrece el caso de estudio de los Pirineos, donde la concepción tradicional de los comunales como propiedad privada colectiva coincide con una definición más igualitarista de los comunes, aportada por nuevos pobladores de origen urbano, que perciben los comunales como recursos de acceso abierto. A raíz del creciente interés por la investigación sobre los comunes, varios de sus conceptos clave se utilizan a menudo de una forma indistinta y acrítica, que acaba generando confusión conceptual y teórica.

Palabras clave: comunales, comunes, recursos comunes, acceso abierto, bienes públicos, teoría de la propiedad, teoría de la acción colectiva, Pirineos.

Introducción

En la actualidad, en los Pirineos, una institución social históricamente clave como los comunales se encuentra en un proceso de redefinición debido a la llegada de nuevas concepciones de lo que son la propiedad comunal, la comunidad, lo común o incluso el bien común. Estas nuevas ideas, que interactúan con las concepciones anteriores de los mismos conceptos, han llegado a la montaña de la mano de nuevos residentes de origen urbano o por parte de jóvenes generaciones de lugareños. Por un lado, tenemos la acepción "tradicional" de los bienes comunales como propiedad privada colectiva, perteneciente a comunidades locales concretas y sujeta a normas y reglamentos de uso que rigen el acceso (o la exclusión) a estas y que a menudo refuerza las desigualdades sociales imperantes. Frente a ella, tenemos unas nuevas versiones del hecho colectivo que hacen hincapié en la capacidad de los recursos comunes para generar justicia social e igualdad mediante el acceso a ellos.

Esta controversia nos ha empujado a acometer una revisión crítica de la literatura sobre *los comunes*, un campo de estudio que emerge con el encuentro de la teoría de la propiedad y la teoría de la acción colectiva (Crawford y Ostrom, 1995) y que se ha desarrollado sobremanera a partir de un enfoque inicial centrado en la gestión de los recursos naturales hasta aparecer en ámbitos tan diversos como la economía digital y las políticas

alternativas. El objetivo siempre fue estudiar el conjunto de normas y reglas utilizadas por un grupo social para distribuir los beneficios de un determinado bien o servicio, así como los costos derivados de su aplicación (Ostrom, 1995). Aunque la bibliografía al respecto es vasta, no pretendemos resumirla aquí, sino más bien centrarnos en la confusión generada por los diferentes usos de que han sido objeto unas mismas denominaciones en diversos contextos de investigación y de acción política.

En este momento se hace necesario un pequeño paréntesis en la discusión teórica para desarrollar una reflexión semántica asociada a los problemas que genera la definición de conceptos cuando se salta de una lengua a otra, en especial en un ámbito caracterizado por la polisemia de los términos utilizados y una falta de sistemática en su uso (Méndez, 2023). La mayor parte de la literatura académica utilizada en estas páginas es anglófona. El término *the commons*, en inglés, se emplea de manera indistinta para referirse, entre otros, al bien común, los recursos de propiedad comunal, los bienes comunes o la gente común. Esta polisemia, asimismo, ha ejercido una gran influencia en la producción académica relativa a este campo en otras lenguas. Al traducir estos trabajos al español, este predominio de una sola palabra debe desdoblarse en varios posibles vocablos con una especificidad relativamente más alta, pero que a menudo se utilizan también con una cierta laxitud. Así, en estas páginas traducimos *the commons* como bienes comunales (o simplemente como comunales), cuando hablamos de la propiedad privada colectiva; como bienes comunes, cuando nos referimos a "la totalidad de las riquezas materiales del mundo, como el aire, el agua, el suelo y las semillas, todos los bienes de la naturaleza considerados como herencia de la humanidad en su conjunto, para ser compartidos juntos" (Basu *et al*., 2017), o al beneficio colectivo; el bien común, cuando el término es utilizado en singular.

La expansión de la teoría de los comunes a áreas de investigación no tradicionales como las ya mencionadas de la economía digital y las políticas alternativas apunta a la necesidad de una revisión crítica de algunos de sus conceptos y tradiciones fundacionales, ya que esta disparidad teórica ha dado lugar a un relativo desorden conceptual: algunos términos clave, en diferentes ámbitos, se utilizan de formas claramente distintas y a menudo incluso

contrapuestas. Cuando estos campos se cruzan, cosa que ocurre a menudo debido a una creciente interdisciplinariedad metodológica, se multiplica el potencial para el malentendido. Allí donde se pone el foco crítico en el uso de los conceptos asociados a *los comunes* fuera de su limitado contexto original, aparecen algunas debilidades y contradicciones (Laín, 2023).

El estudio de los comunes se ha dividido durante mucho tiempo en dos líneas de investigación distintas: una centrada en el estudio de las características de los *recursos comunes* y otra que atiende a los rasgos estructurales de las instituciones creadas para gestionar dichos recursos, denominadas *regímenes de propiedad comunal*. Esta riqueza teórica yace también en el origen de la mencionada confusión conceptual, pues la mayoría de los casos que se estudian sobre el terreno requieren de algo que a menudo no se hace: un enfoque híbrido que aborde tanto los recursos mismos como las instituciones y las prácticas asociadas a su gestión.

En primer lugar, es necesario examinar el concepto de *bienes* o *recursos comunes* (*common pool resources*, CPR en inglés, traducido también en ocasiones como recursos de uso común o de acervo común) como una noción clave en todo el ámbito de los comunes. Este concepto lo desarrollaron investigadores que trabajaban en la teoría de la acción colectiva y a quienes les interesaba identificar las características de los recursos que son predictores del comportamiento social en torno a estos: es decir, qué rasgos de un recurso favorecen que este se convierta en un recurso común y contribuyen a que tenga más probabilidades de ser manejado como un bien de propiedad comunal. El uso del término *recurso de propiedad comunal* (aludiendo a un tipo específico de propiedad), sin una diferenciación clara respecto al *recurso común* (en referencia a sus características específicas) ya genera, a causa de su parecido, importantes problemas a la hora de debatir y describir los comunes. No existe recurso alguno que sea por definición de propiedad comunal. Los recursos, con independencia de sus características físicas, pueden gestionarse de maneras completamente diferentes en épocas y lugares distintos, en función de aspectos como las tecnologías disponibles o las estructuras políticas dominantes y, en última instancia, de su identificación o no como tales. Para añadir todavía más confusión, tanto estas dos expresiones (*recurso de propiedad comunal* y *recurso común*) como una

tercera, *régimen de propiedad comunal*, todas ellas importantes para este campo analítico, generan, en inglés, el mismo acrónimo (CPR).

En segundo lugar, y todavía más importante, en la literatura sobre comunes políticos y digitales existe una tendencia a utilizar el concepto *común* como sinónimo de *acceso abierto*. La confusión en el uso de estas dos categorías es preocupante y anula décadas de debate teórico y discusión para distinguirlas. El hecho de que algunas disciplinas emplean el término *acceso abierto* para describir aquellos recursos no regulados y accesibles a cualquiera, mientras que otras favorecen el empleo del término *dominio público* para el mismo fin, favorece asimismo una confusión potencial, la cual se ve agravada por el hecho de que quienes utilizan la expresión *acceso abierto* emplean habitualmente el término *propiedad pública* para identificar los recursos gestionados por el Estado.

Por último, en el ámbito político, a menudo en forma de organizaciones no gubernamentales (ONG) o de cooperativas, se crean regularmente nuevos espacios colectivos. Sin embargo, muchos de los campos de acción de estas instancias requieren de una intrincada relación con la administración pública, incluyendo, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la financiación, los permisos y la gestión. Esto no quiere decir que no vayan a surgir nuevos bienes comunes a partir de sus actividades, sino que cada caso debe analizarse en su propio contexto. Una posibilidad, por ejemplo, es la aparición de espacios híbridos en los que lo colectivo y lo público (en el sentido de la jurisdicción estatal) operen estrechamente vinculados.

Esta revisión crítica de la teoría de la propiedad no pretende negar que esta teoría y los comunes, en tanto concepto, sean herramientas analíticas útiles. Sin embargo, consideramos que la falta de rigor, así como el uso arbitrario de los términos y los conceptos limitan nuestra capacidad para desarrollar un corpus teórico plenamente integrado y coherente.

Los comunes: recursos, agencia y propiedad

La antropología de la propiedad, consistente en el estudio de la propiedad como relación social, marco jurídico o complejo conjunto de derechos y

obligaciones, tiene una larga historia (Turner, 2017). En 2018 se cumplió medio siglo de la publicación del artículo seminal de Garrett Hardin, "La tragedia de los comunes", que conectaba la ecología, la economía y la política mediante el análisis de los sistemas de gestión de los recursos naturales. Hardin atribuyó a *los comunes* las características de los *recursos de libre acceso*. Su enfoque acerca de la propiedad comunal hacía hincapié en las ineficiencias de esta y, en última instancia, predijo su inevitable desaparición a raíz de las presiones contradictorias que los usuarios no regulados ejercían sobre sus recursos. Según Hardin, solo la propiedad privada individual o la gestión estatal podrían frenar esta "inherente" tendencia humana a la sobreexplotación y el colapso de los bienes valiosos.

Hicieron falta treinta años de investigación por parte de varias disciplinas, que culminaron en la fundación de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes (IASCP) en 1989, la publicación de *Governing the commons* de Elionor Ostrom en 1990, de *Making the commons work*, editado por Daniel Bromley en 1992 (derivado de un panel de la NAS de 1985), y la obra colectiva de la National Science Foundation *The drama of the commons* (2002), para establecer una explicación alternativa de la propiedad comunal como una forma de propiedad privada colectiva regulada. Hardin aceptó este hecho en 1994 en un nuevo artículo publicado con el título "La tragedia de los bienes comunes no gestionados". En 2009, Ostrom recibió el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre la acción colectiva. En el proceso de ordenar los conceptos fundamentales de este nuevo campo en auge, se consolidó un sólido corpus teórico (Feeny *et al*., 1990).

De acuerdo con esta base de conocimientos, quedó asentado que la propiedad comunal no se basa en la ausencia de normas excluyentes y protocolos de uso, como había afirmado Hardin en 1968. Por el contrario, esta es, en esencia, una propiedad privada por parte de grupos, de territorios y recursos regulados a partir de criterios claros de inclusión y exclusión (Bromley, 1989; 1991). Más allá de esto, la propiedad no puede estudiarse como una institución estática, sino que constituye un proceso social que depende de su contexto espacial, cultural y temporal (Galaty, 2016; Hall *et al*., 2011; Hann, 2003; Strang y Busse, 2011), identifica derechos de posesión y acceso (Ribot y Peluso, 2003), puede tener un rol en la

definición de la comunidad (Agrawal y Gibson, 1999; Li, 1996; Verdery, 2018), y se compone de un complejo conjunto de facultades en términos de atribuciones y uso de recursos (Commons, 1893; Schlager y Ostrom, 1992). Quedó establecido también que una gestión sostenible no está garantizada por ningún régimen de gestión concreto, sino que depende, más bien, del contexto en el que se aplique (Bauer, 2006; Ensminger, 1996; Peters, 1994). En el marco de los conceptos asociados con la propiedad comunal, las instituciones no pueden estudiarse como entidades fijas, sino que son parte de una realidad discursiva compleja y en transformación permanente en la que, como subrayan los defensores del institucionalismo discursivo, la comunicación y la apropiación intersubjetiva tienen una relevancia destacada (Schmidt, 2008; 2011).

En la investigación contemporánea, los conceptos asociados a *los comunes* se utilizan ahora no solo en el ámbito de la gestión de los recursos naturales, sino también como elementos centrales para la comprensión de la economía digital y la política alternativa. La creciente incorporación del término en estos nuevos campos ha exacerbado el menoscabo de la concreción en su uso, de modo que nociones como *recursos comunes*, *acceso abierto*, *propiedad comunal*, *dominio público* o *bienes públicos* se utilizan a menudo casi de manera indistinta.

La teoría de la propiedad (Ciriacy-Wantrup y Bishop, 1975; Demsetz, 1974; Hallowell, 1943; Netting, 1982) y la teoría de la acción colectiva (Ostrom 1990; Runge 1984; 1986) han actuado como enfoques interactivos y complementarios que, aunque han sido aplicados sobre todo a los sistemas socioecológicos y pese a algunos desajustes conceptuales, han funcionado bien (Berkes y Folke, 1998). La teoría de la propiedad post-Hardin sitúa todas las formas de propiedad en cuatro tipos ideales e internamente diversos: libre acceso (ausencia total de normas de propiedad y uso), propiedad comunal (propiedad privada colectiva), propiedad privada (propiedad individual o corporativa) y propiedad pública (propiedad de instituciones abstractas, en el sentido de lejanas, y formales, como el Estado en todas sus formas). En este contexto, el análisis se centra en la certidumbre que ofrecen las disposiciones jurídicas e institucionales sobre el futuro control del recurso (Merrill y Smith, 2001). Este enfoque dio

lugar al desarrollo de la concepción de la propiedad como un conjunto íntimamente imbricado de derechos (Coase, 1960; Commons, 1893). Todas las relaciones de propiedad podrían subdividirse en, como mínimo, tres niveles distintos: propiedad formal (título), derechos de gestión (el derecho a decidir qué hacer con los recursos) y usufructo (su uso real) o, de acuerdo con la formulación de Schlager y Ostrom (1992), entre cuatro propiedades diferentes: acceso, retirada, gestión, exclusión y alienación. Estos niveles y atributos pueden residir en un mismo individuo, grupo de individuos o institución, o distribuirse de forma desigual entre las distintas partes interesadas. Es decir, en algunos casos, el propietario reside en la finca y la cultiva, mientras que en otros puede estar ausente, delegar la gestión en terceros que, a su vez, subarriendan la finca a campesinos que la cultivan sin que sea suya.

Por otro lado, los recursos pueden evaluarse atendiendo a sus propias características: excluibles (algunos usuarios pueden excluir a otros) frente a no excluibles, y agotables frente a no agotables (su gestión genera o no rivalidad) (Heller, 2010). Este esquema de clasificación define una tipología de bienes dividida en cuatro bloques: bienes privados (excluibles y agotables), de club (excluibles y no agotables), de uso común en el sentido de CPR (no excluibles y agotables) y públicos (no agotables y no excluibles) (Ostrom, 2005). El hecho de que el uso de un recurso afecte a la posibilidad de que otros lo utilicen porque puede ser agotado (rivalidad) no garantiza su uso excesivo o restringido, ni la presencia o ausencia de regulaciones (ni siquiera el tipo de regulación). Esta categorización se establece a través de identificar las características físicas de los recursos, no las regulaciones que las ordenan (lo que produce la diferenciación entre *propiedad privada*, *comunal*, *pública* y *acceso abierto*).

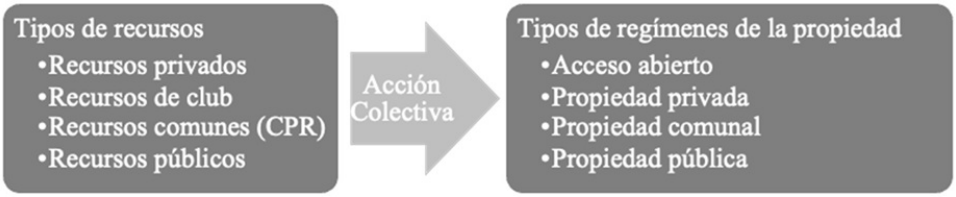
Ostrom y otros estudiosos identificados con lo que se denomina el nuevo institucionalismo (Mulé, 1999; Nee, 1998) señalaron una serie de aspectos que favorecerían la consolidación de una acción colectiva exitosa, que contribuyen a la aparición y la aplicación de cláusulas de exclusión asociadas a la propiedad comunal (Ostrom, 1990; 2005). Estos rasgos incluirían, entre otros, la existencia de un grupo identificable de personas con derechos sobre el recurso y de un recurso claramente definido y delimitado, el carácter

local de las normas de gestión y la existencia de mecanismos de control y resolución de conflictos percibidos como legítimos (Agrawal, 2001; Chamberlain, 1974; Edney y Bell, 1983). Cuanto mayor sea el grupo de usuarios, por ejemplo, más difícil será consolidar la acción colectiva. El énfasis en la capacidad de excluir centra el foco analítico, implícitamente, en la idea de las demarcaciones (Fennell, 2011; Merrill, 1998). El éxito de la acción colectiva en relación con los bienes comunes, articulada mediante criterios de inclusión/exclusión, puede dar como resultado la consolidación de la propiedad comunal. Sin embargo, este énfasis de la teoría de la acción colectiva en la predicción requiere mantener una dualidad conceptual ficticia: "Un [CPR es un] tipo de bien consistente en un sistema de recursos naturales o artificiales, cuyo tamaño o características hacen que sea costoso, aunque no imposible, excluir a los beneficiarios potenciales de la obtención de beneficios a partir de su uso" (Ostrom, 1990: 30). Es decir, cuando los teóricos de la acción colectiva se refieren a un recurso común (CPR), se están refiriendo a un sistema de recursos antes de que esta acción colectiva se lleve a cabo, antes de que fracase o tenga éxito.

Esta definición supone la existencia de recursos no reclamados sobre los cuales los grupos sociales podrían tener éxito o fracasar a la hora de articular la acción colectiva. Así pues, la teoría de la acción colectiva requiere o presupone un momento cero desde el que se puede iniciar el análisis del desarrollo de la agencia colectiva. En ese momento cero, según la teoría de la acción colectiva, los pastos, la montaña, los peces, el río o la leña, por ejemplo, constituirían recursos comunes (CPR). La peculiaridad de esta aproximación es que, por supuesto, en ningún sistema de recursos naturales existe un momento cero: un momento x en el que un recurso es de uso común, y un momento x + 1 en el que ese sistema se ha transmutado en acceso abierto o en propiedad comunal dependiendo de si la acción colectiva ha fracasado o ha tenido éxito. Si nadie lo utiliza y a nadie le interesa utilizarlo, no es un recurso. Si se ha producido el cambio económico y cultural necesario para que un bien haya sido transformado en recurso, eso implica que alguien quiere usarlo o que ya lo está usando, y que ya está siendo gestionado en acceso abierto, como propiedad comunal o de alguna otra manera. Así pues, los CPR son una ficción intelectual.

Asimismo, ¿cuál sería el significado de la expresión "costoso, pero no imposible" en la definición de Ostrom? Los comunes, cuando identifican la propiedad colectiva (la propiedad comunal), se basan en la existencia de regulaciones que permiten la exclusión efectiva de potenciales usuarios externos, mientras que los recursos comunes (CPR) se basan exactamente en lo contrario, en la teórica accesibilidad generalizada a estos. En otras palabras, los recursos comunes han sido pensados por la teoría de la acción colectiva como sistemas en los que un tipo de recurso previo a la articulación de una acción colectiva potencial es, de hecho, un sistema sin utilizar. De esta forma, los recursos comunes pueden convertirse en bienes comunales institucionalizados (propiedad comunal) si la organización de la acción colectiva tiene éxito, o pueden utilizarse como recursos de libre acceso si fracasa este mismo esfuerzo. Los recursos comunes son un concepto que surgió del esfuerzo teórico por refutar la tragedia de los comunes de Hardin, pero que, paradójicamente, sufre sus mismas contradicciones: confunde el acceso abierto con la propiedad comunal. Sostenemos que el uso del artificio de los recursos comunes (CPR) es una de las fuentes de la confusión conceptual que se aprecia hoy en día en la investigación sobre los bienes comunales. Esta confusión, como señaló Ostrom (2000), se ve agravada por el hecho de que, en la bibliografía, el acrónimo anglófono CPR unas veces se refiere a *recursos comunes* y otras a *recursos de propiedad comunal* (Ashenafi y Leader-Williams, 2005; Berkes, 1989; Dasgupta, 2005; Wade, 1987). Ostrom *et al.* (2002: 14) subrayan, en este sentido, "la importancia de la distinción entre las características del recurso (recurso común) y el régimen que gestiona el recurso (régimen de propiedad comunal u otro tipo de régimen de propiedad)". La investigación sobre los comunes ha tendido a bifurcarse dependiendo de si la atención se centraba en el propio recurso y sus características o en su régimen de gobernanza.

Figura 1. Campos temáticos de la teoría de la propiedad y sus relaciones.



Desde el punto de vista de la gestión de los recursos, las características de estos (si son o no excluibles, si son o no agotables) son fundamentales. Además, el enfoque fijado en los recursos divide potencialmente los sistemas entre existencias y flujos (Gerber y Steppacher, 2017; Hoffmann, 2013). Esta distinción entre la parcela de tierra y los cultivos que se cosechan de ella es ciertamente importante y permite refinar el análisis del conjunto de derechos, pero sigue requiriendo la incorporación, a posteriori, del análisis institucional y, en consecuencia, de la batería de conceptos necesarios para su aplicación precisa (Hartley, 2018). Aunque desde una perspectiva institucional la atención se centra en el régimen de propiedad, el uso de la noción de CPR presupone la existencia (e incluso quizá la prevalencia) del recurso por encima del régimen de propiedad (Gardner *et al*., 1990). El sistema de clasificación de los recursos no es problemático desde el punto de vista de la "agotabilidad": o bien el consumo en un momento dado reduce la cantidad disponible para el consumo posterior, o bien no lo hace (aunque, como demuestra el caso de la polución, el uso indiscriminado de un recurso como el aire, que de momento no es agotable, puede reducir su calidad para usuarios posteriores). En todo caso, la "agotabilidad" genera un modelo analítico binario relativamente sencillo. Sin embargo, el potencial de exclusión como característica de un sistema de recursos es más complicado de entender ya que, a pesar de que se presenta también como un rasgo supuestamente binario, alude en realidad a una escala progresiva continua.

¿En qué momento un recurso pasa de ser fácil a ser difícil de excluir? Un mismo recurso puede ser gestionado de distintas maneras, en distintos lugares y por personas también distintas. El potencial de exclusión no es una propiedad fija a lo largo del tiempo ni en el ámbito local. En otras palabras, la gestión excluyente de un recurso puede ser costosa, pero la tecnología, la demografía o la política, por mencionar solo algunos factores, cambian con el tiempo y pueden modificarla (Anderson y Grewell, 1999). Los bosques de Nueva Inglaterra, antaño una extensión arbórea vasta e inalcanzable, un teórico CPR, son hoy un mosaico de regímenes de propiedad que incluye una altísima presencia de la propiedad privada individual y corporativa (Acheson, 2000). ¿Eran esos bosques un CPR si apropiarse de ellos era tan sencillo que incluso el más costoso de los regímenes de propiedad —la propiedad privada— podía aplicarse sobre ellos? Este argumento también puede aplicarse, por ejemplo, a partes importantes de las sabanas de África Oriental (Bollig y Lesorogol, 2016; Lesorogol, 2008), o a las llanuras del Medio Oeste de los EE. UU., cuyos costos de exclusión cambiaron para siempre con la introducción de las alambradas (Dolan, 2014). Lo que no era privatizable por sus costos inimaginables fue privatizado en un lapso relativamente corto con la aparición de una tecnología con la capacidad de delimitar ese espacio a bajo costo. Los recursos costeros y marinos, a menudo presentados como ejemplos paradigmáticos de bienes naturales extremadamente difíciles de reservar para el uso exclusivo de una comunidad, han sido gestionados en algunos lugares de manera exitosa mediante acuerdos institucionales colectivos (Acheson, 1988; Kurien, 1991; McCay, 1998). Un recurso dado en un momento histórico particular podría no gestionarse mediante normas excluyentes y treinta años más tarde haberse convertido en propiedad privada. ¿Puede ser considerado este recurso (exactamente el mismo trozo de tierra, bosque o río) un recurso común? Sus rasgos biofísicos no han cambiado, pero sí pueden haberlo hecho las capacidades tecnológicas o las prioridades socioeconómicas de los usuarios. En otras palabras, aunque las características del bien no son irrelevantes, tampoco definen de manera irrevocable el régimen de propiedad que se aplicará en su gestión. ¿Puede entenderse un recurso al margen de su tiempo y, en consecuencia, de su régimen de propiedad/gestión (Bromley, 1992; McCay y Acheson,

1987)? Los recursos comunes (CPR), como categoría esencial inmutable en referencia a la propiedad, por volver a un punto anterior, no existen.

La propia Ostrom reflexiona sobre el hecho de que no distinguir entre un sistema de recursos y un sistema de propiedad constituye una de las fuentes clásicas de confusión en la teoría de la propiedad. A pesar de destacar en su definición de CPR los elevadísimos costos de exclusión de estos, añade: "Los recursos comunes pueden ser propiedad de Gobiernos nacionales, regionales o locales; de grupos comunales; de particulares o empresas; o ser utilizados como recursos de libre acceso por cualquiera que pueda disfrutar de ellos. Cada uno de estos amplios tipos de regímenes de propiedad presenta diferentes ventajas y desventajas" (2000: 338). En otras palabras, las características del bien no predicen de forma inequívoca sus pautas de uso y gestión, y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto en sí mismo es desconcertante. El término mismo *recurso* apunta al uso y a la gestión: de lo contrario, estaríamos hablando de elementos naturales, del territorio o de ambiente. Si hablamos de recursos, hablamos de uso y gestión (regímenes de propiedad en toda su complejidad). Cuando estudiamos los recursos comunes, aunque nos centramos en sus rasgos, nuestro objetivo último es comprender cómo han sido utilizados y apropiados: las características de sus regímenes de propiedad. Esto no quiere decir que sus rasgos no importen, pero centrarse en exclusiva en los aspectos físicos de los recursos ha tendido a definir un enfoque determinista que ha obviado el hecho de que la historia y la política influyen en las formas de su apropiación tanto como pueden hacerlo su estacionalidad o sus mismas dimensiones (Agrawal, 2003).

Esto plantea la cuestión de si la noción de recursos comunes (CPR) constituye un concepto útil. A nuestro entender, los CPR como concepto, en su formulación actual, no son estrictamente necesarios para la teoría de la propiedad: la acción colectiva puede estudiarse en sistemas que podríamos definir como de acceso abierto o de propiedad comunal atendiendo a la normativa que regula su uso sin perder ningún potencial analítico. El uso del concepto de recursos comunes no contribuye a la comprensión de los cambios en las formas de gestión de un sistema. Por el contrario, como el término incluye la palabra *común* y la propiedad comunal es un resultado

potencial de la acción colectiva sobre un CPR (el otro es el acceso abierto), la confusión surge fácilmente y nos encontramos con casos en los que los términos *CPR* y *común* se utilizan de manera indistinta. Hardin (1968) mezcló las características del acceso abierto y los comunales. Esta confusión se vio agravada por el hecho de que utilizó un mismo término, *los comunes*, para describir unas veces los recursos y otras un régimen de gestión. Sin embargo, la literatura posterior sobre el tema sigue estando repleta de casos que confunden el acceso abierto y los comunales al pasar por alto las diferencias entre los recursos comunes y los bienes de propiedad comunal atendiendo a su régimen de propiedad o de gestión.

La proliferación de los comunes

La emergencia de trabajos relativos a los bienes comunes en campos que van más allá de la gestión de los recursos naturales nos saca de la zona de confort teórica y nos obliga a replantearnos los límites y la vigencia del marco conceptual construido por la teoría de los comunes (Hess, 2008). Históricamente, la mayoría de los teóricos de la propiedad que analizan la gestión de la pesca, la madera o los pastos se han sentido cómodos asociando los recursos comunes a los comunales. Sin embargo, cuando la teoría de los comunes se utiliza para abordar asuntos relacionados con el *software*, el conocimiento, las calles, los parques infantiles, internet, las bibliotecas o la vivienda social, es evidente que se refiere a sistemas con unas características físicas y sociales muy diferentes. Resulta obvio que los criterios de exclusión, por ejemplo, aunque se discuten y se tratan de forma análoga a como se trabaja con los sistemas de recursos naturales, no son equivalentes. No son lo mismo y, por medio de esta extrapolación conceptual acrítica, se pierde claridad analítica. En estos ámbitos, la distinción entre recursos comunes y bienes públicos se hace todavía más difícil de esclarecer.

Por ejemplo, Wikipedia es el recurso calificado de dominio público por excelencia, un bien público en su fase de uso o consumo (es de acceso abierto, es decir, ilimitado, y constituye un recurso inagotable). Sin embargo, en su fase de producción, tanto Wikipedia como gran parte del *software* de acceso abierto se gestionan y elaboran por comunidades identificables con normas de

comportamiento y de exclusión consensuadas. Durante su fase de producción, importantes casos de los comunes digitales son el resultado, de hecho, de un esfuerzo comunitario. Sin embargo, Wikipedia, en su fase de uso, estrictamente hablando, no puede calificarse como una forma de recurso común. Se trata, en cierto modo, de un dilema del tipo ya mencionado entre existencia y flujo. Sin embargo, la definición que Wikipedia da de sí misma fusiona producción y distribución para poder definirse como un bien común:

> Los comunes digitales son una forma de comunes que implican la distribución y propiedad comunal de los recursos informativos y la tecnología. Los recursos suelen estar diseñados para ser utilizados por la comunidad que los ha creado. Algunos ejemplos de comunes digitales son los *wikis*, el *software* de código abierto y las licencias de código abierto. La distinción entre los comunes digitales y otros recursos digitales es que la comunidad de personas que los construye puede intervenir en el gobierno de sus procesos de interacción y de sus recursos compartidos (Wikipedia, consultado el 4 de julio de 2017).

El concepto de *los comunes* se utiliza en este contexto digital para describir procesos de cooperación e intercambio que producen un campo de acción compartido (Benkler, 2006). Estamos pasando de una relación social y jurídica fija, descrita por la teoría de la propiedad en referencia a la propiedad territorial, a un concepto que describe un marco de interacción social en el contexto de la economía de la información (Hess y Ostrom, 2007), un marco que permite que las relaciones de producción se produzcan fuera de la esfera mercantilizada dominada por un *quid pro quo* capitalista y en el que la cooperación y el intercambio generan recursos de libre acceso (*software*, revistas, etc.). Internet se convierte en la materialización de lo que sería el dominio público, el lugar donde, por definición, todo es público (*sic*), de acceso abierto (Bollier y Helfrich, 2014; Boyle, 2008). Está claro que en estos espacios los conceptos de *acceso abierto*, *comunes* y *dominio público* se utilizan a menudo de forma intercambiable o indiferenciada.

De hecho, para entender correctamente los comunes digitales, hay que conceptualizarlos como un proceso constituido por dos fases: el primer nivel es

la producción, y a este nivel existen comunidades reguladas, con normas de acceso e interacción —verdaderos bienes comunales institucionalizados—. En un segundo nivel, el del uso o el consumo de estos bienes comunes digitales, la mayoría de las veces hablamos de recursos de acceso abierto ya que no existe ninguna cláusula de exclusión. Son recursos que se diferencian de otros, como los pastos o la pesca, porque son inagotables y en ellos el efecto *free rider* es insignificante. El énfasis en lo común por parte de la investigación sobre los comunes digitales desestima el uso del recurso y se centra en la gobernanza de su producción (Dulong de Rosnay y Le Crosnier, 2012), identificando de facto dos niveles de análisis distintos: el primero engloba a los productores del recurso (*software*, centros de información, etc.) y su gobernanza; el segundo se centra en el propio recurso, que es un producto inagotable (no genera rivalidad) y se utiliza como un bien de dominio público (una forma de acceso abierto).

Esta línea de razonamiento nos obliga a realizar una revisión conceptual adicional. La comunidad, como concepto, debe problematizarse (McCay y Jentoft, 1998). La propiedad comunal, por definición, define una comunidad, la de los comuneros (los no excluidos), aquellos que pueden interactuar con un recurso. La investigación debe tener en cuenta que la composición de la comunidad puede ser o no la misma en cada fase del desarrollo de un recurso determinado (gestión, producción y uso). La comunidad seguirá siendo un concepto fundamental, pero tomará una forma diferente en el caso de los comunes ambientales, digitales y políticos, y en las distintas fases del desarrollo de cada sistema de recursos (Fuster, 2010; Jeffrey *et al*., 2012).

El hecho de que los productos de la economía digital se basen en el conocimiento, en la palabra o, más ampliamente, en narrativas (textuales, auditivas y visuales), subraya la importancia del libre acceso. La noción de la *libertad de expresión*, con la contribución del enfoque ideológico libertario (que no liberal), conceptualiza esas narrativas como recursos incuestionablemente comunes o, en este caso, de libre acceso (Coleman, 2009). El proceso de digitalización de la cultura y la subsiguiente creación de comunidades digitales ha tenido consecuencias en la forma en que se construyen los recursos así generados: "Las prácticas sociales del *software* libre y abierto plantean la idea de que las formas de propiedad pueden ser antitéticas a los principios de la libertad de expresión" (Coleman,

2004: 508). Este énfasis en lo común como libertad es lo que conecta los comunes digitales con el común político alternativo (Broumas, 2018; Papadimitropoulos, 2017). La idea de que el mundo digital ha generado recursos comunes oscurece dos puntos: 1) en muchos casos los bienes fueron generados por comunidades cerradas o semicerradas capaces de autorregularse mediante un régimen que podría entenderse como comunal, pero 2) que el producto sea utilizado y compartido por medios no excluyentes define efectivamente estos bienes en su fase de consumo como bienes públicos (una forma de acceso abierto).

Sin embargo, la economía digital está sometida a una gran presión excluyente para privatizar (encerrar) con el fin de vender y, por tanto, generar beneficios. Paradójicamente, en este ámbito, el acceso abierto se defiende mediante la privatización y la regulación (Kelty, 2008). Este es el papel de la plétora de estrategias de concesión de licencias, como Creative Commons, diseñadas para moderar o controlar el impacto de la privatización sobre la circulación del conocimiento (Vercelli, 2009). Así, paradójicamente, los comunes digitales se han creado en internet para contrarrestar las tendencias privatizadoras, tratando de preservar el acceso abierto mediante la concesión de licencias (Coriat, 2015; Turner, 2010).

El *Manifiesto de Budapest* proporciona una narrativa y un marco intelectual para esta liberalización del conocimiento (IUGG GeoRisk, 2002). El objetivo es producir conocimiento de libre acceso difundido mediante internet. Al menos desde su publicación en 2001, la investigación en acceso abierto ha sido una parte fundamental de la agenda política académica. Hoy en día, todos los investigadores que reciben financiación pública en la UE, EE.UU. o Canadá deben publicar sus resultados en revistas de acceso abierto. Este énfasis "en el acceso y la preservación de la información científica" también queda patente en la *Declaración de Mallorca sobre Ciencia Abierta* de 2016. La Comisión Europea, en su informe *Europe's future: open innovation, open science, open to the world* publicado por la Dirección de Investigación e Innovación, afirma: "Proponemos medidas políticas para desarrollar la apertura como herramienta inclusiva: la apertura como 'comunes'" (RISE Group, 2017: 16). De forma deliberada y enfática, se funde *apertura* con *comunes*. En este documento político, los

comunes se igualan oficialmente al acceso abierto. La fusión de ambos conceptos, por desgracia, se completa.

Este movimiento conceptual puede identificarse tanto en las obras de los teóricos de la economía digital como en las de figuras de la izquierda política alternativa. Bollier, uno de los pensadores clave del movimiento de los comunes políticos, comienza de este modo uno de sus libros más destacados:

> [El interlocutor del autor dijo:] "¡Oh, ya lo pillo! Los comunes son cosas que nadie posee y que son compartidas por todos". [Bien dicho] (2014: 13). En una entrevista a Christian Laval, escritor de referencia sobre el común político, utilizando un lenguaje que encontramos también en algunas obras dedicadas a los comunes digitales, este afirma: "Hablar de los comunes es superar la lógica de la apropiación y de la propiedad" (en Parés, 2017: 99). En una línea similar, la artista digital radical Cornelia Sollfrank, en una presentación titulada *Art and speculative commons* en el Reseau Exagram (Universidad Concordia), se refería a "lo que los artistas pueden aportar a la cultura libre y, eventualmente, a los communes" (2017, Common lab interview, 7'34") .

En la teoría de la propiedad, el debate sobre los comunales comenzó afirmando justo lo contrario: que los comunales no eran bienes de acceso abierto y que constituían una categoría social y conceptual que incluía normas y cláusulas de exclusión diferentes a las de la propiedad individual o las jurisdicciones gubernamentales. A pesar de este hecho bien conocido, el término *comunes se* ha convertido, de nuevo, en sinónimo de *acceso abierto* o, incluso, de *dominio público*: "Los bienes comunes mundiales están en peligro. Esto se debe en parte al papel de los derechos de propiedad intelectual en la mercantilización de tres ámbitos distintos: la ciencia, la cultura y la sanidad. Los tres ámbitos solían considerarse áreas importantes del dominio público o de acceso público [...] Debemos replantearnos si estos sectores funcionan mejor bajo las reglas de los mercados y el capitalism" (Andersen, 2006: 2).

En los colectivos de izquierda del mundo occidental, donde se concentra el debate sobre el potencial de los comunes políticos alternativos, existe la tendencia a ver los comunales como instituciones a pequeña escala que

generan igualdad de derechos, deberes y rentabilidad a partir de los recursos no privados y que están profundamente vinculadas al ecologismo. Esta tendencia conecta a estos grupos con una vieja genealogía intelectual con raíces tan profundas como el primer socialismo utópico y el comunismo (Moro, 1516; Fourier, 1808; Owen, 1813), o que puede remontarse a Proudhon (1876), o incluso al legado intelectual de la Comuna de París. Se trata de un movimiento social que siempre ha estado presente en muchas zonas urbanas de clase trabajadora del mundo occidental (al menos durante los últimos doscientos años, en los que el pensamiento social crítico ha articulado, de un modo u otro, las esperanzas de aquellos que sueñan con un cambio social, con modelos alternativos al absolutismo primero y al capitalismo después). Tras la crisis económica mundial de 2008 y especialmente desde el movimiento Occupy de Nueva York (2011) y los Indignados de Madrid (2011), los comunes políticos han resurgido como un movimiento político dominante que ha logrado escapar de la pesada sombra de los mal llamados regímenes socialistas (Broumas, 2018). Estos movimientos, conectados en red por todo el mundo, reúnen miles de iniciativas de la sociedad civil que pretenden generar alternativas económicas y políticas al capitalismo neoliberal (Caffentzis y Federici, 2014; Laval y Dardot, 2015).

Resulta un tanto desconcertante que algunos defensores de los comunes políticos defiendan el rechazo a la idea de propiedad, abogando *de facto* por los recursos de libre acceso (Bollier, 2014) y al mismo tiempo por un enfoque de lo común centrado en la práctica de la regulación colectiva de los recursos por parte de las comunidades locales (Laval y Dardot, 2015). A pesar de que afirman lo contrario, su énfasis en la existencia de comunidades (y de redes que las articulan) nos redirige al debate introducido con anterioridad alrededor de la dialéctica entre la exclusión y la inclusión y, por tanto, a la propiedad (Eizenberg, 2012; Swyngedouw, 2005). Estudiosos como De Angelis (2010; 2017) han abordado esta cuestión analizando la "comunalización" (*commoning*), la práctica de crear comunidad: los bienes comunales como práctica relacional.

Aunque el pensamiento político alternativo no se materializa en absoluto en un movimiento social homogéneo, su objetivo general es la transformación social y política. A raíz de esto, en muchos casos, las

políticas alternativas promueven esfuerzos conscientes para articular las iniciativas de la sociedad civil con las instituciones públicas. Por supuesto, hay cooperativas que funcionan como auténticos comunales (como propiedad privada colectiva), pero muchas de ellas aspiran a generar justicia social por medio de interacciones estrechas con organismos gubernamentales (Borch y Kornberger, 2015; Chatterton, 2010; Esping-Andersen, 1990).

Sin embargo, los dos conceptos clave de "lo público" (la propiedad y los bienes públicos) utilizan el término *público* para significar cosas completamente distintas. La propiedad pública se refiere a algo que pertenece a una institución pública (por ejemplo, los terrenos expropiados por el Estado con el fin de declarar un parque nacional) y que, por tanto, tiene una dinámica muy específica: está gestionado por especialistas, representantes de un dispositivo institucional externo de grandes dimensiones y atravesado por lógicas burocráticas. Los bienes públicos, en cambio, son bienes sobre los que es imposible imponer normas de exclusión y que son inagotables (como el aire o la luz solar). Los bienes públicos forman parte del dominio público en el sentido de que son de libre acceso y su uso, en principio, no reduce su disponibilidad (Dulong de Rosnay y De Martin, 2012).

> Un bien público es algo a lo que todo el mundo tiene acceso, pero que, a diferencia de un recurso común [CPR], el uso que una persona hace del recurso no disminuye necesariamente el potencial de uso por parte de otra. Las emisoras de radio públicas, el conocimiento científico y la paz mundial son bienes públicos en el sentido de que todos disfrutamos de sus beneficios sin reducir la cantidad o la calidad del bien (Ostrom *et al.,* 2002: 4-5).

De acuerdo con esta definición, los bienes públicos no son recursos comunales porque, aunque son de libre acceso, constituyen un recurso inagotable. Se deduce de esta cita que la principal característica de los CPR no son sus posibles regímenes de gestión sino el hecho de que se trata de recursos relativamente limitados. Sin embargo, la definición de CPR de Ostrom citada al inicio del artículo hace hincapié en el hecho de que el

tamaño del recurso permite que la exclusión sea complicada pero no imposible. En otras palabras, los bienes comunes y los bienes públicos parece que no son definidos como tipos completamente opuestos de recursos no excluibles: los recursos comunes, en uno de sus dos posibles encarnaciones posteriores a la acción colectiva (el acceso abierto), permiten tanta exclusión como los bienes públicos, es decir, ninguna.

Repensando los comunes en la práctica: los comunales en los Pirineos

En la actualidad, en los Pirineos, una institución social clave como "los comunales" se encuentra en un proceso de redefinición debido a la llegada de nuevas concepciones de lo que son los comunes, la comunidad, los bienes comunes o incluso el bien común. Estas nuevas ideas que interactúan con las definiciones anteriores de los mismos conceptos a menudo son traídas a las montañas por nuevos habitantes de origen urbano o por jóvenes generaciones de lugareños. Por un lado, tenemos la definición "tradicional" de los comunales que coincide con la ofrecida por la teoría de la propiedad: constituyen una propiedad privada colectiva, con normas establecidas y reglamentos de uso que controlan su acceso. Cabe añadir que estas reglas contribuyen a reforzar las estructuras sociales locales, a menudo desiguales. Por otro lado, tenemos unas nuevas versiones del hecho colectivo que hacen hincapié en la capacidad de los comunales para generar justicia social, igualdad de acceso a los recursos y protección del ambiente. Estos comunes, como "cosa de todos", los acerca, con matices, a los bienes de acceso abierto (Vaccaro y Beltrán, 2019).

Esta cohabitación de definiciones distintas de un mismo concepto y de la forma ideal de lo que debería ser una comunidad proporciona un caso de estudio perfecto para debatir el impacto de los imaginarios culturales y los deseos colectivos en la materialización de lo social y la influencia que nuevas formas de definir un régimen de la propiedad tiene en el concepto y la institución. Cada grupo social es portador de diferentes presupuestos culturales que acarrean distintas economías morales implícitas y actúan como marco interpretativo de lo viejo y de lo nuevo (Holmes, 1988; Narotzky y Smith, 2006).

A lo largo de la historia, el régimen de propiedad de los montes en los Pirineos ha estado dominado por la presencia de comunales gestionados por las comunidades locales como propiedad privada colectiva. Sin embargo, los comunales como tales desaparecieron formalmente durante el siglo XIX, cuando las formas de propiedad del país se "modernizaron" después de que el Estado español pusiera en marcha las campañas de la llamada desamortización (Serrano Álvarez, 2014). Como resultado de este proceso, a principios del siglo XX la totalidad del antiguo patrimonio comunal se había convertido en alguna de las siguientes modalidades de tenencia: a) montes municipales (gestionados por los Ayuntamientos, aunque técnicamente pertenecientes al Estado); b) montes estatales (gestionados por entidades no locales y pertenecientes igualmente al Estado), y c) montes pertenecientes a sociedades de propietarios (propiedad privada colectiva —en el sentido mercantil— pertenecientes a todos o algunos de los antiguos usuarios de los montes comunales que se unieron para adquirirlos durante el proceso de liberalización) (Vaccaro y Beltrán, 2010). Por medio de estas políticas y del despliegue masivo, a partir de la década de 1980, de una amplia red de áreas protegidas (solapadas a menudo con los antiguos montes pertenecientes a las comunidades vecinales) (Beltrán y Vaccaro, 2017b), el Estado, irónicamente, se convirtió en un actor principal en la gestión de territorios relacionados con el antiguo hecho comunal (Mansbridge, 2014).

Este es, de manera resumida, el proceso político que desmanteló la propiedad comunal en España (muy similar al ocurrido también en Francia; véase Whited, 2000). No obstante, la realidad es mucho más compleja, y a menudo se niega a actualizarse mediante cambios históricos bien definidos (Montesinos y Campanera, 2017). La población local sigue utilizando a menudo el término "el común" para referirse a montes incluidos en alguna de las categorías mencionadas (que, en estos momentos, legalmente son de propiedad pública o incluso privada) (Lana e Iriarte-Goñi, 2015). En algunos casos, gracias a la memoria institucional, los montes municipales siguieron gestionándose de acuerdo con las normas que habían regulado los bienes comunales hasta la desamortización (Vázquez, 2020). A pesar del cambio en la titularidad, los pastos siguen siendo gestionados en algunos pueblos por órganos integrados por los propios vecinos interesados

en su aprovechamiento (Merry, 2017). Aquellos que a raíz del descenso demográfico perdieron su anterior estatuto de municipios vieron cómo sus antiguos comunales se incorporaban al patrimonio de las nuevas entidades locales y dejaron de mantener, a menudo, derechos sobre los montes de sus anteriores demarcaciones. Para los miembros de las sociedades de propietarios, sus montes son, indiscutiblemente, una propiedad privada restringida, a diferencia de los antiguos comunales, a quienes participaron en su adquisición. En este contexto, para los lugareños, las montañas están compartimentadas con claridad y, por medio de una u otra vía, tienen derecho a beneficiarse de ellas individuos concretos. Para los visitantes, turistas en su mayoría, estas mismas montañas se perciben como bienes comunes (de acceso abierto) o como bienes públicos (pertenecientes al Estado, es decir, de todos), por lo que estas personas a menudo no entienden ni respetan los cerramientos y los accesos restringidos. La incorporación de una gran parte de estas montañas a diferentes categorías de protección ambiental contribuyó a reforzar esta interpretación: la conservación, al fin y al cabo, se ejerce bajo el manto legitimador del bien común, como denota la expresión misma de patrimonio natural.

En otras palabras, a pesar de que la mayoría de los comunales históricos son hoy de propiedad pública, estarían sujetos, de acuerdo con las perspectivas de distintos actores, a un cierto pluralismo legal, en especial en aquellos casos donde los aprovechamientos productivos (ganaderos y forestales) se han mantenido de acuerdo con las normas y los órganos de las antiguas comunidades locales. Los comunales fueron desmantelados por políticas liberalizadoras que privatizaron o nacionalizaron todos los bienes que habían integrado en el pasado el patrimonio vecinal, siendo sustituidos por un marco jurídico construido en torno a la prevalencia del individuo —el ciudadano— frente al grupo. Además, en las localidades donde la pérdida de población y el envejecimiento socavaron la continuidad demográfica, las juntas de vecinos se desmoronaron y los municipios, como órganos de la administración local del Estado, se hicieron cargo de la gestión.

Si bien la falta de consenso en la interpretación del estatuto legal de los antiguos comunales se relaciona con su desarrollo histórico, este proceso sigue abierto. La aparición reciente en este mismo escenario de nuevos actores,

con perspectivas y propósitos propios, añade todavía más complejidad al pluralismo jurídico antes mencionado. En la actualidad se identifican, en este contexto, un mínimo de hasta tres tradiciones intelectuales distintas que interactúan entre sí y compiten por la definición de lo que fueron y son los bienes comunales, en una disputa en la que se dirimen los derechos de los diferentes actores, pero que también están asociadas a proyectos políticos en competencia por definir el futuro de la región.

En los Pirineos, una definición básica de los bienes comunales los presentaría como un régimen de propiedad en el que la mayor parte del territorio (las zonas forestales y pastoriles de las montañas) era poseída en común por las comunidades locales. Parte de la literatura relativa a los bienes comunales se basa en el supuesto de que la gestión colectiva asociada a esta distribución de la propiedad comportaba un acceso igualitario a los recursos naturales en el ámbito local (Trawick, 2003). Los comunales históricos en los Pirineos sí implicaban la propiedad y la gestión comunal de los montes y sus recursos, pero no garantizaban la igualdad entre los vecinos. El acceso de estos al patrimonio poseído en común dependía de su estatus particular. Las familias ricas, aquellas que disponían de más recursos propios (tierras de cultivo, ganado, infraestructuras y capital) tenían una mayor capacidad de beneficiarse de los bienes colectivos que las más desfavorecidas. En otras palabras, la gobernanza de los bienes comunales no sólo encubría las diferencias existentes entre los vecinos, sino que contribuía a reforzar la estructura social desigual de la comunidad local. Las normas establecidas para regular el acceso no eran intencionalmente igualitarias (Beltrán y Vaccaro, 2017a). Una regla habitual, por ejemplo, establecía que cada casa, cada explotación familiar, podía llevar a los pastos vecinales de aprovechamiento estival tantas cabezas de ganado como fuera capaz de sustentar con sus propios recursos durante el invierno (cuando los animales se alimentaban del forraje obtenido en las fincas privadas del fondo de los valles). Aquellas que disponían de más tierras podían mantener un mayor número de animales y, de este modo, tenían derecho a beneficiarse en mayor grado de los recursos poseídos y gestionados de manera colectiva.

El andamiaje legal que se utilizó durante los siglos XIX y XX para desmantelar los comunales se relacionaba con un marco intelectual

modernizador e individualizador (basado en los preceptos de la Ilustración) que era predominante en las zonas urbanas de la época. Este marco jurídico (un ciudadano adulto, un voto) chocaba con el enfoque jurídico tradicional en el que la unidad de referencia era la casa (la familia), lo que implicaba un voto por hogar (la mayoría de las veces, representado por el varón de más edad, el que tenía propiamente la consideración plena de vecino en los derechos, las obligaciones y la toma de decisiones en el plano local).

La población de estos territorios de montaña ha cambiado de forma considerable en los últimos treinta años. A la despoblación que caracterizó la segunda mitad del siglo XX siguió una oleada de inmigrantes, a menudo denominada población neorrural, que ha ido adquiriendo un cierto peso demográfico (y, posteriormente, político) en algunas localidades (Aldomà y Mòdol, 2022; Collantes, 2009; Guirado, 2007; Monllor y Fuller, 2016). Estas personas, en su mayoría jóvenes, proceden de zonas urbanas y, en algunos casos, traen consigo experiencias previas con sindicatos, cooperativas y asociaciones de carácter progresista. Esta nueva población está contribuyendo a configurar una "nueva ruralidad": una concepción de la vida rural en la que las actividades agropecuarias no están necesariamente en el centro de su economía y en la que no se incluyen algunas de las estructuras de poder tradicionales de las comunidades locales de montaña (Estany, 2022; Viladomiu y Rosell, 2016). Este desplazamiento se relaciona, entre otros factores, con el impulso de la UE a una ruralidad multifuncional: una economía diversificada con énfasis en el turismo y la conservación (Marsden *et al*., 1993; Salamaña, 2022; Wilson, 2007). Las personas con este bagaje experiencial llegan con su propia interpretación de lo que son o deberían ser los bienes comunales, una interpretación que tiende a incluir consideraciones de igualdad y de justicia social en su imagen idealizada de la gestión (Chevalier, 1981; Dardot y Laval, 2019; Nogué, 1988; Waldren, 1996). En este contexto, lo comunal deviene un sinónimo de "propiedad de todos", una aproximación que en la que los antiguos comunales, que históricamente constituían una propiedad privada colectiva (bienes pertenecientes a una comunidad vecinal de carácter corporativo), se desplazarían en lo conceptual para pasar a ser considerados como recursos de acceso abierto. Este mismo conflicto conceptual es el

que se ha materializado no pocas veces en forma de malentendidos (y hasta de enfrentamientos) entre los propietarios locales y los transeúntes o los agentes turísticos por el escaso respeto a las fincas y las pistas privadas. La atención a la propiedad particular, que apenas es cuestionada en contextos urbanos, desaparece casi por completo en las zonas de montaña donde el territorio es construido conceptualmente por los visitantes como un patrimonio de todos.

En 2013 se constituía el grupo de trabajo Iniciativa Comunales, con el objetivo de preservar y promover "los valores que, por regla general, caracterizan los usos comunales y los hacen especialmente valiosos para la sociedad, entre ellos la sostenibilidad, la adaptabilidad, la multifuncionalidad, la integración de los valores culturales, la *distribución equitativa de los recursos*, la justicia social, la responsabilidad, los procesos participativos y el empoderamiento de las comunidades locales". Por su parte, en la comarca catalana del Pallars Sobirà, en convocatorias electorales recientes, por primera vez obtuvieron representación en varios municipios candidaturas encabezadas por residentes que no habían nacido en la zona. En Soriguera, un municipio situado en el corazón de la comarca, las elecciones municipales de 2015 fueron ganadas por un partido político no tradicional, la Candidatura de Unitat Popular (CUP), una organización anticapitalista de izquierdas cuyo electorado era abrumadoramente urbano. Durante un par de años, el nuevo equipo municipal realizó asambleas deliberativas para tratar de asuntos colectivos, así como impulsó convocatorias de trabajo vecinal con el fin de realizar mejoras en las vías de acceso a la población.

La existencia de un patrimonio de titularidad municipal, así como de una antigua tradición de gestión en común es actualizada hoy con matices que tienen sentido para estos nuevos vecinos. Este comunalismo renovado se articula en torno a conceptos como los de patrimonio colectivo, restauración ambiental, responsabilidad social e igualitarismo. Sin embargo, su enfoque progresista se apoya en una lectura idealizada de los comunales históricos en los que, detrás de una igualdad formal de derechos y un discurso centrado en la identidad local y el interés colectivo, encubría en realidad un universo social diferenciado (entre casas ricas y casas pobres, entre hombres y mujeres, entre viejos y jóvenes, entre locales y forasteros). Y, al mismo tiempo, su

perspectiva ecologista pasa por alto que los regímenes de propiedad suelen estar también vinculados a la ingeniería ambiental. Durante siglos, muchas de estas comunidades de montaña habían administrado y transformado su entorno, fomentando unos segmentos específicos de biodiversidad (los pastos y las masas forestales), al mismo tiempo que erradicaban otros (como los grandes depredadores). Su gestión no se relacionaba con el mantenimiento integral de ecosistemas, sino principalmente con la supervivencia de la comunidad y de aquellas relaciones socioecológicas que resultaban instrumentales para ella, con la reproducción, en definitiva, de un orden social establecido (Netting, 1982).

Conclusiones: inestabilidades teóricas

El concepto de los comunes, de lo comunal, está siendo adoptado por campos analíticos (como la economía digital y la política alternativa) que van mucho más allá del ámbito de su uso tradicional: la gestión de los recursos naturales. Desde esta perspectiva, el enfoque interdisciplinario que siempre ha caracterizado los trabajos sobre los bienes comunes ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. El análisis del uso de los conceptos asociados a la teoría de los comunes en estos nuevos campos apunta a que esta nueva popularidad interdisciplinar se ha desarrollado a costa de la pérdida de una cierta claridad conceptual. Esta revisión ha intentado identificar varios ejemplos de esta confusión: hoy en día los términos *comunes* y *acceso abierto*, por ejemplo, se utilizan a menudo sin distinción para identificar un mismo recurso. En algunos casos, también existe cierto nivel de conflación entre los comunes y la propiedad pública. Esto genera un desorden que socava la capacidad analítica del cuarteto conceptual clásico definido por la teoría de la propiedad: acceso abierto y propiedad comunal, privada y pública.

Estas discusiones no son solo de índole teórica. Como hemos visto con los referentes pirenaicos, estas refundaciones conceptuales, con sus propios lenguajes e implicaciones, están teniendo impactos tangibles sobre el territorio y su gestión. Diferentes actores sociales, con sus bagajes culturales y políticos, con sus narrativas sobre lo comunal, conviven en el

mismo escenario y compiten por la redefinición y el uso de sus recursos. El comunal pirenaico es definido por unos como una propiedad colectiva exclusiva de la comunidad local (o de unos determinados miembros de esta, aquellos que cumplen ciertos prerrequisitos), como un bien no regulado (es decir, de acceso abierto), o incluso como un territorio público (perteneciente y regido por el Estado, pero también un poco de todos). Desde otra perspectiva, también observamos un cierto grado de confusión en torno al uso de la categoría de *lo público*, ya que la propiedad pública como régimen de la propiedad no es lo mismo que los bienes públicos tal como los define la economía. El primer término implica un acuerdo institucional que presupone la propiedad estatal, mientras que el segundo describe recursos no excluyentes y no agotables que no generan rivalidad (recursos en acceso abierto).

La ampliación de nuestro análisis de los comunes a campos poco habituales nos ha permitido identificar una característica singular en la teoría de la acción colectiva que podría favorecer estas confusiones. Un elemento conceptual clave de la teoría de la acción colectiva es el recurso común (CPR). La propia definición de los CPR los caracteriza como una ficción conceptual, ya que encarnan sistemas de recursos sin utilizar antes de su gestión y explotación. Un CPR, nos dice la teoría, es un sistema que, mediante una acción colectiva exitosa o fallida puede convertirse en dos cosas distintas: un sistema de acceso abierto o uno regulado por un régimen de propiedad comunal.

Además, el hecho de que algunos sistemas de recursos que pueden haber sido difíciles de controlar en el pasado y que, por tanto, se consideraban CPR en este contexto, puedan llegar a ser relativamente fáciles de privatizar con la llegada de innovaciones tecnológicas o de cambios políticos, todavía añade una capa más de vaguedad. Esto implica que un mismo recurso, pese a mostrar características físicas invariables, puede llegar a cambiar de estatus con el tiempo: un CPR de alguien puede convertirse en el bien privado de un descendiente suyo.

En resumen, hay mucho que aprender del estudio de cómo diferentes disciplinas definen y utilizan el mismo concepto. Cuando empezamos

este artículo estábamos convencidos de que íbamos a criticar la literatura sobre los bienes comunes generada desde los estudios digitales y políticos por su falta de rigor y por realizar un uso confuso de términos clave de la teoría de la propiedad. En lugar de esto, hemos identificado ineficiencias o complicaciones fundamentales en algunas definiciones básicas de esta misma teoría. El vaivén teórico no resuelto entre el análisis de las características de los recursos (propio de la economía) y la investigación sobre el régimen de propiedad (característico de la antropología y la geografía humana) tiende a generar tensión e incertidumbre. Las características de los recursos son, en efecto, clave para entender los sistemas que estudiamos, pero no pueden evaluarse fuera del tiempo y de su contexto social. Los recursos deben entenderse también dentro del marco que proporciona el régimen de propiedad que articula su gestión.

Es interesante darse cuenta de que el concepto de CPR, concebido en un inicio como la base de una teoría que podría cuestionar la atribución de Hardin de las características de los sistemas de acceso abierto a la propiedad comunal, ha creado, al encarnar a la vez la posibilidad del acceso abierto y los bienes comunes, una confusión muy parecida, aunque al mismo tiempo mucho más sutil.

Referencias

Acheson, J. 1988. *The lobster gangs of Maine*. UPNE.

Acheson, J. 2000. Clearcutting Maine: implications for the theory of common property resources. *Human Ecology*, *28*(2), 145-169.

Agrawal, A. 2001. Common property institutions and sustainable governance of resources. *World Development*, *29*(10), 1649-1672.

Agrawal, A. 2003. Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and politics. *Annual Review of Anthropology*, *32*(1), 243-262.

Agrawal, A. y C. Gibson. 1999. Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. *World Development*, *27*(4), 629-649.

Ajuntament de Cardós. 2021. Reglamento de Montes Públicos de Esterri de Cardós.

Aldomà, I. y J. R. Mòdol. 2022. *Atles del món rural: despoblament o revitalització?* Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya / Associació Catalana de Municipis de Catalunya / Fundació Transparència i Bon Govern Local / Associació de Micropobles de Catalunya.

Andersen, B. (Ed.). (2006). Intellectual property rights: Innovation, governance and the institutional environment. Edward Elgar Publishing.

Anderson, T. y B. Grewell. 1999. Property rights solutions for the global commons: bottom-up or top-down. *Duke Environmental Law & Policy Forum*, *10*, 73-101.

Ashenafi, Z. T. y N. Leader-Williams. 2005. Indigenous common property resource management in the Central Highlands of Ethiopia. *Human Ecology*, *33*(4), 539-563.

Basu, S., J. Jongerden y G. Ruivenkamp. 2017. Development of the drought tolerant variety Sahbhagi Dhan: exploring the concepts commons and community building. *International Journal of the Commons*, *11*(1), 144-170.

Bauer, K. 2006. Common property and power: insights from a spatial analysis of historical and contemporary pasture boundaries among pastoralists in Central Tibet. *Journal of Political Ecology*, *13*, 24-47.

Beltrán, O. e I. Vaccaro. 2017a. Los comunales en el Pirineo Central: idealizaciones del pasado y reelaboraciones contemporáneas. *Revista de Antropología Social*, *26*(2), 235-257.

Beltrán, O. e I. Vaccaro. 2017b. *Parcs als comunals. La patrimonialització de la muntanya al Pallars Sobirà*. Generalitat de Catalunya.

Benkler, Y. 2006. *The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom*. Yale University Press.

Berkes, F. 1989. *Common property resources. Ecology and community-based sustainable development*. Belhaven Press / International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

Berkes, F. y C. Folke (eds.). 1998. *Linking social and ecological systems. management practices and social mechanisms for building resilience*. Cambridge University Press.

Bollier, D. 2014. *Think like a commoner: a short introduction to the life of the commons.* New Society Publishers.

Bollier, D. y S. Helfrich (eds.). 2014. *The wealth of the commons: a world beyond market and state*. Levellers Press.

Bollig, Michael, y Carolyn Lesorogol. 2016. "The 'New Pastoral Commons' of Eastern and Southern Africa." International Journal of the Commons 10 (2): 665–687.

Borch, C. y M. Kornberger (eds.). 2015. *Urban commons: rethinking the city*. Routledge.

Boyle, J. (2008). The public domain: Enclosing the commons of the mind. New Haven, Conn.; London: Yale University Press.

Bromley, D. W. 1989. Property relations and economic development: the other land reform. *World Development*, *17*(6), 867-877.

Bromley, D. W. 1991. *Environment and economy: property rights and public policy*. Blackwell.

Bromley, D. W. 1992. The commons, property, and common-property regimes. En D. W. Bromley (ed.). *Making the commons work* (3-16). ICS Press.

Broumas, A. (2018). Commons' movements and 'progressive'governments as dual power: The potential for social transformation in Europe. *Capital & Class*, *42*(2), 229-251.

Broumas, Antonios. 2017. "Social Democratic and Critical Theories of the Intellectual Commons: A Critical Analysis." *tripleC: Communication, Capitalism & Critique* 15 (1): 100–126.

Caffentzis, G. y S. Federici. 2014. Commons against and beyond capitalism. *Community Development Journal*, *49*(S1), i92-i105.

Chamberlin, J. 1974. Provision of collective goods as a function of group size. *American Political Science Review*, *68*(2), 707-716.

Chatterton, P. 2010. Seeking the urban common: furthering the debate on spatial justice. *City*, *14*(6), 625-628.

Chevalier, M. 1993. Neo-rural phenomena. *Espace géographique. Espaces, modes d'emploi*, número especial, 175-191.

Ciriacy-Wantrup, S. y R. Bishop. 1975. "Common property" as a concept in natural resources policy. *Natural Resources Journal*, *15*(4), 713-727.

Coase, R. 1960. The problem of social cost. En *Classic papers in natural resource economics* (87-137). Palgrave Macmillan.

Coleman, G. 2004. The political agnosticism of free and open source software and the inadvertent politics of contrast. *Anthropological Quarterly*, *77*(3), 507-519.

Coleman, G. 2009. Code is speech: Legal tinkering, expertise, and protest among free and open source software developers. *Cultural Anthropology*, *24*(3), 420-454.

Collantes, F. 2009. Rural Europe reshaped: the economic transformation of upland regions, 1850-2001. *Economic History Review*, *62*(2), 306-323.

Commons, J. 1893. *The distribution of wealth*. Macmillan and Company.

Coriat, B. 2015. *Le retour des communs: la crise de l'idéologie propriétaire*. Les Liens qui Libèrent.

Crawford, S. E. y E. Ostrom. 1995. A grammar of institutions. *American Political Science Review*, *89*(3), 582-600.

Dardot, P. y C. Laval. 2019. *Common: on revolution in the 21st century*. Bloomsbury.

Dasgupta, P. 2005. "Common Property Resources: Economic Analytics." Economic and Political Weekly 40(16): 1610–1622.

De Angelis, M. 2010. The production of commons and the "explosion" of the middle class. *Antipode*, *42*(4), 954-977.

De Angelis, M. 2017. *Omnia sunt communia: on the commons and the transformation to postcapitalism*. Zed Books Ltd.

Demsetz, H. 1974. Toward a theory of property rights. En *Classic papers in natural resource economics* (163-177). Palgrave Macmillan.

Dolan, K. 2014. *Beyond the fruited plain: food and agriculture in US literature, 1850-1905*. University of Nebraska Press.

Dulong de Rosnay, M. y H. Le Crosnier. 2012. An introduction to the digital commons: from common-pool resources to community governance. En *Building Institutions for Sustainable Scientific, Cultural and Genetic Resources Commons*. International Association for the Study of the Commons.

Dulong de Rosnay, M. y J. De Martin. (eds.). 2012. *The digital public domain: foundations for an open culture*. Open Book Publishers.

Edney, J. y P. A. Bell. 1983. The commons dilemma: comparing altruism, the golden rule, perfect equality of outcomes, and territoriality. *Social Science Journal*, *20*, 23-33.

Eizenberg, E. 2012. Actually existing commons: three moments of space of community gardens in New York City. *Antipode*, *44*(3), 764-782.

Ensminger, J. 1996. *Making a market: the institutional transformation of an African society*. Cambridge University Press.

Esping-Andersen, G. 1990. *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.

Estany, G. 2022. Les transformacions del paisatge rural i els reptes d'un pais de boscos. En R. Cerarols y J. Nogué (eds.). *L'altre món rural* (69-85). Tigre de Paper.

Feeny, D., F. Berkes, J. B. McCay y J. M. Acheson. 1990. The tragedy of the commons: twenty-two years later. *Human Ecology*, *18*(1), 1-19.

Fennell, L. A. 2011. Ostrom's law: property rights in the commons. *International Journal of the Commons*, *5*(1), 9-27.

Fourier, Ch. 1971. *Design for Utopia: selected writing.* Schocken. (Publicación original, 1808).

Fuster, M. 2010. *Governance of online creation communities: provision of infrastructure for the building of digital commons* [Tesis de doctorado, European University Institute, Florence].

Fuster, M., J. Subirats, M. Berlinguer, R. Martínez y J. Salcedo. 2015. *Procomún digital y cultura libre: ¿hacia un cambio de época?* Icaria.

Galaty, J. 2016. Reasserting the commons: pastoral contestations of private and state lands in East Africa. *International Journal of the Commons*, *10*(2), 709-727.

Gardner, R., E. Ostrom y J. M. Walker. 1990. The nature of common-pool resource problems. *Rationality and Society*, *2*, 335-358.

Gerber, J.-F. y R. Steppacher. 2017. Basic principles of possession based economies. *Anthropological Theory*, *17*(2), 217-238.

Guirado, C. 2007. *Del despoblament a la revitalització demogràfica: canvis en el comportament de la població al Pirineu català (1860-2006). El cas de l'Urgellet i el Baridà (Alt Urgell-Cerdanya)* [Tesis de maestría, Universitat Autònoma de Barcelona].

Hall, D., P. Hirsch y T. Li. 2011. *Powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.

Hallowell, I. 1943. The nature and function of property as a social institution. *Journal of Legal and Political Sociology*, *1*, 11-138.

Hann, C. M. 2003. *The postsocialist agrarian question: property relations and the rural condition. Vol. 1*. LIT Verlag Münster.

Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science*, *162*, 1243-1248.

Hardin, G. 1994. The tragedy of the unmanaged commons. *Trends in Ecology and Evolution*, *9*(5), 199.

Hartley, T. 2018. Who owns the flows? Distinguishing ownership of resource flows from ownership of resource stocks clarifies debates about property bundles, commons tragedies, and degrowth. *Journal of Political Ecology*, *25*, 602-616.

Heller, M. (ed.). 2010. *Commons and anticommons I*. Elgar Editions.

Hess, Charlotte. 2008. Mapping the New Commons. Ponencia presentada en Governing Shared Resources: Connecting Local Experience to Global Challenges, 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons, University of Gloucestershire, Cheltenham, Inglaterra, 14–18 julio.

Hess, C. y E. Ostrom (eds.). 2007. *Understanding knowledge as a commons: from theory to practice*. MIT Press.

Hoffmann, S. 2013. Property, possession, and natural resource management: towards a conceptual clarification. *Journal of Institutional Economics*, *9*(1), 39-60.

Holmes, D. 1989. *Cultural disenchantments: worker peasantries in Northeast Italy*. Princeton University Press.

IUGG GeoRisk. 2002. *The Budapest Manifesto on Risk Science and Sustainability*. www.iugg-georisk.org/Documents/Commission%20reports/Budapest_Manifesto_2002.pdf

Jeffrey, A., C. McFarlane y A. Vasudevan. 2012. Rethinking enclosure: space, subjectivity and the commons. *Antipode*, *44*(4), 1247-1267.

Kelty, C. M. 2008. *Two bits: the cultural significance of free software*. Duke University Press.

Kurien, J. 1991. *Ruining the commons and responses of the commoners: coastal overfishing and fishermen's actions in Kerala state, Indian*. United Nations Research Institute for Social Development.

Laín, B. 2023. Implicaciones y alcances del debate acerca de los bienes comunes y la(s) propiedad(es). En B. Laín (coord.). *Ni público, ni privado, ¿sino común?* (23-41). Bellaterra.

Lana, J.-M. e I. Iriarte-Goñi. 2015. Commons and the legacy of the past. Regulation and uses of common lands in twentieth century Spain. *International Journal of the Commons*, *9*(2), 510-532.

Laval, C. y P. Dardot. 2015. *Común: ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*. Gedisa.

Lesorogol, C. 2008. *Contesting the common: privatizing pastoral lands in Kenya*. University of Michigan Press.

Li, T. 1996. Images of community: discourse and strategy in property relations. *Development and Change*, *27*, 510-527.

Mallorca Declaration on Open Science. 2016 http://openscience.ens.fr/DECLARATIONS/2017_01_17_Mallorca_Declaration_on_Open_Science.pdf

Mansbridge, J. 2014. The role of the state in governing the commons. *Environmental Science & Policy*, *36*, 8-10.

McCay, B. 1998. *Oyster wars and the public trust: property, law, and ecology in New Jersey history*. University of Arizona Press.

McCay, B. y J. M. Acheson. 1987. *The question of the commons: the culture and ecology of communal resources*. University of Arizona Press.

McCay, B. y S. Jentoft. 1998. Market or community failure? Critical perspectives on common property research. *Human Organization*, *57*(1), 21-9.

Marsden, T., J. Murdoch, P. Lowe, R. C. Munton y A. Flynn. 1993. *Constructing the countryside*. UCL Press.

Méndez de Andrés, A. 2023. Comunes, comunales, procomún. En B. Laín (coord.). *Ni público, ni privado, ¿sino común?* (43-63). Bellaterra.

Merrill, T. 1998. Property and the right to exclude". Nebraska Law Review, *77*, 730.

Merrill, T. y H. Smith. 2001. What happened to property in law and economics. *Yale LJ*, *111*, 357.

Merry, S. E. 2017. Legal pluralism. En *The globalization of international law* (29-56). Routledge.

Monllor, N. y A. Fuller. 2016. Newcomers to farming: towards a new rurality in Europe. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, *62*(3), 531-551.

Montesinos, Lidia, y Mireia Campanera. 2017. "Formas de vida, usos y apropiación de recursos: Una aproximación crítica a los comunes contemporáneos". *Revista de Antropología Social*, 26(2): 193–216.

Moro, T. 1967. *Utopia*. New American Library. (Publicación original, 1516).

Mulé, R. 1999. New institutionalism: distilling some 'hard core' propositions in the works of Williamson and March and Olsen. *Politics*, *19*(3), 145-151.

Narotzky, S. y G. Smith. 2006. *Immediate struggles: people, power, and place in rural Spain*. University of California Press.

Nee, V. 1998. "Sources of the New Institutionalism." En The New Institutionalism in Sociology, editado por Mary C. Brinton y Victor Nee, 1–16. Stanford, CA: Stanford University Press.

Netting, R. 1982. "Territory, Property, and Tenure." En Behavioral and Social Science Research: A National Resource, editado por R. McC. Adams, N. J. Smelser y D. J. Treiman, 446–502. Washington, D.C.: National Academy Press.

Nogué, J. 1988. El fenómeno neorrural. *Agricultura y Sociedad*, *47*, 145-175.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons.* Cambridge University Press.

Ostrom, E. 1994. 6. Constituting social capital and collective action. *Journal of Theoretical politics*, *6*(4), 527-562.

Ostrom, E. 2000. Private and common property rights". En B. Boukaert y G. De Geest (eds.). *Encyclopedia of Law and Economics, Vol. II: Civil Law and Economics* (332-379). Edward Elgar.

Ostrom, E. 2005. *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.

Ostrom, E., T. Dietz, N. Dolsak, P. C. Stern, S. Stonich y E. U. Weber. 2002. *The drama of the commons*. National Academy Press.

Owen, R. (1813). *A New View of Society: Or, Essays on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice: Essay 2* (Vol. 2). Cadell & Davies.

Papadimitropoulos, V. 2017. The politics of the commons: reform or revolt?". *TripleC*, *15*(2), 565-583.

Praés i Franzi, M. 2017. Entrevista: conversa amb Christian Laval. *Nous Horitzons*, (215): 94-100.

Peters, P. 1994. *Dividing the commons: politics, policy, and culture in Botswana*. University Press of Virginia.

Proudhon, P.-J. 1993. *What is property?: An inquiry into the principle of right and of government*. Cambridge University Press. (Publicación original, 1876).

Ribot, J. C. y N. L. Peluso. 2003. A theory of access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153-181.

RISE Group. 2017. *Europe's future: open innovation, open science, open to the world*. European Union.

Runge, C. F. 1984. Institutions and the free rider: the assurance problem in collective action. *Journal of Politics*, *46*, 154-181.

Runge, C. F. 1986. Common property and collective action in economic development. *World Development*, *14*(5), 623-635.

Salamaña, I. 2022. Transrural: dels oficis i professions a la digitalització i robotització. En R. Cerarols y J. Nogué (eds.). *L'altre món rural* (87-108). Tigre de Paper.

Schlager, E. y E. Ostrom. 1992. Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. *Land Economics*, 249-262.

Schmidt, Vivien A. 2008. "Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse." Annual Review of Political Science 11: 303–326.

Schmidt, V. 2011. Reconciling ideas and institutions through discursive institutionalism. *Ideas and Politics in Social Science Research*, Vol. X, 47-64.

Serrano Álvarez, J. 2014. When the enemy is the state: common lands management in northwest Spain (1850-1936). *International Journal of the Commons*, *8*(1), 107-133.

Strang, V. y M. Busse. 2011. *Ownership and appropriation*. Berg.

Swyngedouw, E. 2005. Governance innovation and the citizen: the Janus face of governance-beyond-the-state. *Urban Studies*, *42*(11), 1991-2006.

Trawick, P. 2003. *The struggle for water in Peru: comedy and tragedy in the Andean commons*. Stanford University Press.

Turner, F. 2010. *From counterculture to cyberculture: stewart brand, the whole Earth network, and the rise of digital utopianism*. University of Chicago Press.

Turner, B. 2017. The anthropology of property. En *Comparative property law* (26-48). Edward Elgar Publishing.

Vaccaro, I., L. Zanotti y J. Sepez. 2009. Commons and markets: opportunities for development of local sustainability. *Environmental Politics*, *18*(4), 522-538.

Vaccaro, I. y O. Beltrán. 2010. Conservationist governmental technologies in the Western European mountains: the unfinished transformation of the Pyrenees. *Journal of Political Ecology*, *17*, 29-41.

Vaccaro, I. y O. Beltrán. 2019. What do we mean by "the commons?" An examination of conceptual blurring over time. *Human Ecology*, *47*, 331-340.

Vázquez, Iago. 2020. "Toward an Integrated History to Govern the Commons: Using the Archive to Enhance Local Knowledge." International Journal of the Commons 14 (1): 154–172.

Viladomiu, L. y J. rdi Rosell. 2016. Nova ruralitat a Catalunya a les últimes dècades: diversificació, emprenedoria i ocupació. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, *62*(3), 553-567.

Vercelli, A. H. 2009. *Repensando los bienes intelectuales comunes: análisis socio-técnico sobre el proceso de co-construcción entre las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías digitales para su gestión* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Quilmes]. http://www.arielvercelli.org/rlbic.pdf

Verdery, K. 2018. *The vanishing hectare: property and value in postsocialist Transylvania*. Cornell University Press.

Wade, R. 1987. The management of common property resources: collective action as an alternative to privatization or state regulation. *Cambridge Journal of Economics*, 11(2), 95-106.

Waldren, J. 1996. *Insiders and outsiders: paradise and reality in Mallorca*. Berghahn Books.

Whited, T. 2000. *Forests and peasant politics in modern France*. Yale University Press.

Wilson, G. 2007. *Multifunctional agriculture: a transition theory perspective*. Cromwell Press.

SECCIÓN B.
CONCEPTOS ANALÍTICOS CLAVE ALREDEDOR DEL ESTADO Y EL MERCADO COMO FACTORES DISRUPTIVOS BÁSICOS

8. El retorno a la economía moral... para el estudio de los movimientos campesinos trasnacionales del siglo XXI*[1]

Marc Edelman

Resumen: *The moral economy of the peasant*, de James C. Scott (1976), apareció en un momento en el cual los "estudios campesinos" habían comenzado a ocupar un lugar importante en las ciencias sociales. El enfoque del libro sobre Vietnam, como también su argumento novedoso acerca de las causas de la rebelión rural, atrajo la atención de muchos y desencadenó debates candentes acerca de la "racionalidad" campesina y la relevancia de conceptos de la economía neoclásica para el análisis de agricultores pequeños. En este artículo analizo la noción de E. P. Thompson de "economía moral" y el uso dado por Scott a esta noción para desarrollar una teoría empírica de la explotación. Luego discuto otras influencias sobre Scott, incluyendo a Karl Polanyi, A. V. Chayanov y los historiadores de la escuela de *Annales*. La *economía moral* y la *crisis de subsistencia* son conceptos que Scott elaboró sobre todo en relación con las políticas locales o nacionales. En la sección final del artículo, delineo los cambios que afectan a los campesinos en la era de la globalización y la continua relevancia de los discursos de la economía moral en las campañas transnacionales de agricultores contra la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Palabras clave: campesinado, agricultura, acción colectiva, movimientos sociales, globalización.

---

1 Publicado originalmente en: Marc Edelman, 2005, "Bringing the moral economy back in… to the study of 21st century transnational peasant movements", *American Anthropologist*, 107(3): 331-345. Los editores agradecen al profesor Marc Edelman y a la *Revista American Anthropologist* por ceder los derechos de traducción del artículo.

*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

Abstract: James C. Scott's *The Moral Economy of the Peasant* (1976) appeared at a time when "peasant studies" had begun to occupy an important place in the social sciences. The book's focus on Vietnam, as well as its novel argument about the causes of rural rebellion, attracted widespread attention and unleashed acerbic debates about peasants' "rationality" and the applicability of concepts from neoclassical economics to smallholding agriculturalists. In this article, I analyze E. P. Thompson's notion of "moral economy" and Scott's use of it to develop an experiential theory of exploitation. I then discuss other influences on Scott, including Karl Polanyi, A. V. Chayanov, and the Annales historians. "Moral economy" and "subsistence crisis" are concepts that Scott elaborated mainly in relation to village or national politics. In the final section of the article, I outline changes affecting peasantries in the globalization era and the continuing relevance of moral economic discourses in agriculturalists' transnational campaigns against the World Trade Organization (WTO).

Keywords: peasantry, agriculture, collective action, social movements, globalization.

Introducción

En este artículo quisiera dar una nueva lectura a uno de los primeros trabajos del influyente científico político estadounidense James C. Scott, *The moral economy of the peasant* (1976), y argumentar por su continua relevancia para entender los movimientos campesinos de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Existen varias razones para hacerlo. Primero, la obra de Scott se basa firmemente en el estudio de políticas agrarias, y la mayoría de otros análisis recientes de su impacto en las ciencias sociales (aparte de Sivaramakrishnan, 2005[2]) se enfocan sobre todo en sus implicaciones en una serie de debates no agrarios. Segundo, una consideración de ejemplos recientes de la acción colectiva campesina en relación con el trabajo de Scott sobre "economía moral" y las rebeliones campesinas en el

2 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas. En dicha lista únicamente figuran obras del mismo autor con otras fechas de publicación.

sudeste de Asia a comienzos del siglo XX pueden arrojar nueva luz sobre cambios en los movimientos, las políticas y las economías agrarias en décadas recientes. En particular, ahora que los movimientos de campesinos y pequeños agricultores tienen una dimensión transnacional significativa, es importante analizar cómo el contenido de nociones tales como las de economía moral y crisis de subsistencia —ambas elaboradas principalmente en referencia a luchas y desastres localizados— han evolucionado en el contexto de nuevas políticas agrarias y formas de economía campesina. Y tercero, una nueva lectura de *The moral economy of the peasant* permitirá tanto una evaluación de algunas de las corrientes teóricas diversas que convergieron en este extraordinario libro como su impacto sobre debates subsecuentes en estudios agrarios.

La economía moral

Uno de los más minuciosos esfuerzos por trazar los orígenes y los significados cambiantes de la economía moral es el ensayo de E. P. Thompson *The moral economy reviewed* (1991: 259-351), el cual apareció veinte años después de su famoso artículo pionero sobre la multitud inglesa (1971) y quince años después de *The moral economy of the peasant* (1976). Thompson ubica las primeras referencias de economía moral a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando los cartistas y otros críticos del capitalismo lo contrapusieron al *laissez-faire* de la economía política apoyada por "charlatanes" ("quacks") (1991: 336-337).[3] Examinando con su característico escepticismo agudo la diversidad de aproximaciones producidas por su ensayo sobre la multitud inglesa, Thompson nos recuerda que su propia concepción de economía moral estaba "en general [...] confinada a confrontaciones en la plaza de mercado sobre acceso (o derecho) a 'necesidades' —alimentos esenciales"—, particularmente especulación y las creencias, usos, formas y emociones profundas que rodean el mercadeo de alimentos en tiempo de escasez" (1991: 337-338). Los manifestantes y

3 El *Rational peasant* de Popkin (1979) evoca esta distinción, aunque sin reconocer sus orígenes en el siglo XVIII o los significados peyorativos —como lo destacó Thompson— que críticos tempranos adjuntaron a la economía política.

amotinados del siglo XVIII que Thompson celebró se expresan contra el grano acaparado y retenido, y los beneficios imprevistos, agricultores que vendieron a intermediarios en lugar de hacerlo en los mercados semanales, molineros y panaderos que revendían al menudeo o adulteraban productos, exportaciones que recibieron subsidios y precios que no se acostumbraban o eran o de su gusto.

El uso de la economía moral de Scott no se desvía mucho del dado por Thompson. Sin embargo, este pone menos énfasis sobre la participación de los consumidores en los mercados de alimentos que sobre los valores o costumbres. Este énfasis sobre costumbres incluyó las expectativas de los productores y las nociones que ellos tenían de un derecho a "precios justos" (incluyendo alquileres e impuestos "justos"), así como también otras clases de derechos, tales como el acceso a la tierra, a recolectar o a pescar, derechos de servidumbre de paso para atravesar propiedades, mecanismos redistributivos y formas de reciprocidad que vincularon a los campesinos entre ellos mismos y con las elites. Incorporando estos otros elementos, el enfoque de Scott está también más explícitamente interesado en el desarrollo de una "teoría fenomenológica de la explotación" (Scott, 1976: 161, 31).[4] De acuerdo con Scott, la mayoría de los campesinos mantuvieron creencias profundamente arraigadas acerca del derecho a la "seguridad de subsistencia" (1976: 35). Ellos manifestaron una aversión generalizada a los riesgos que podría amenazar esta seguridad y un completo pavor de aquellos "umbrales" o niveles críticos pasados de los cuales un hogar podría caer vertiginosamente al hambre y la miseria (1976: 101). A su vez, estos elementos subjetivos o *mentalité* llegan a ser determinantes clave de donde, en cualquier coyuntura dada, los campesinos terminaban sobre el continuo entre "la aparente inactividad" y la revolución abierta.[5]

4 Thompson se acerca a esto en su discusión de la "existencia ideal" del "modelo paternalista" de comercio administrado localmente, aunque él muestra menos interés en la subjetividad del pobre que en la manera como las fuerzas intrusas del mercado erosionaron las instituciones regulatorias existentes y generaron resentimientos populares (1971: 83-88).

5 Uso la frase "aparente inactividad" porque, aun cuando *The moral economy of the peasant* de Scott se enfocó sobre la cuestión tal vez más discutida de los estudios campesinos —las causas de rebelión—, anticipó en muchos sentidos su posterior escrito sobre la "micro" o "infrapolítica" de resistencia (e.g., Scott, 1985; 1990).

Las concepciones campesinas de justicia descritas por Scott para el sudeste de Asia a finales del siglo XIX y comienzos del XX no son, en sus perfiles generales, muy diferentes para otros tiempos y lugares (digamos, América Latina de finales del siglo XX), lo cual explica en parte por qué su libro ha tenido tal resonancia. En el centro de esto yace la idea de precios justos o precio sobre costo, frases que he escuchado en los lamentos de docenas de agricultores centroamericanos contemporáneos, quienes a menudo las pronuncian con una chispa de rabia en sus ojos. Significativas también son las expectativas, desarrolladas durante un largo tiempo histórico, de lo que Estados y elites podrían exigir y de lo que ellos deben, a su vez, proporcionar en tiempos de necesidad. Por último, las cuestiones de cuáles valores son medibles, de cuáles cosas o servicios pueden convertirse en mercancías, y de cuáles recursos naturales o comunitarios recursos pueden ser apropiados para el uso y beneficio privado también figuran de modo significativo en las concepciones de justicia de los pobres rurales.

Hoy, los recursos específicos destinados a la mercantilización son diferentes de lo que fueron hace una centuria, pero el discurso moral de los campesinos afectados es notablemente similar. El "derecho a la subsistencia" también sigue siendo importante; sin embargo, para los movimientos campesinos en las décadas recientes y en diversas regiones del mundo (como lo describiré con más detalle a continuación), se ha ampliado al "derecho a seguir siendo agricultores". Esto significa, en esencia, el derecho a continuar viviendo de la tierra, así como también la protección de un patrimonio tanto de instituciones del sector público, que hicieron posible la agricultura a pequeña escala y que ahora están en la mira de privatizadores neoliberales, como del germoplasma y de los cultivos de microbacterias para elaborar quesos, que los antagonistas de los campesinos ahora a veces codician como "propiedad intelectual". Más aún, en muchos países, aquellas instituciones del sector público —las oficinas estatales de acopio y venta de productos básicos, agencias de extensión, programas de reforma agraria y de irrigación, entre otros— generaron a lo largo del tiempo un "alza en las expectativas de los niveles aceptables de subsistencia" (Haugerud, 1995: 10-11). Las expectativas de lo que constituyó un nivel de vida aceptable quizá nunca fueron estáticas en sociedad alguna. Sin embargo, la tendencia

al alza de expectativas, alimentada en muchos casos por los programas gubernamentales y la retórica de políticos, ha significado que los retos más significativos que enfrentan los campesinos en sus intentos de mejorar su situación ya no son necesariamente aquellos que amenazan la autonomía de las comunidades o sus prácticas tradicionales de reciprocidad no mercantil. Los terratenientes, los mercados, y el Estado cobran un nuevo rol y ponen en peligro las esperanzas de los campesinos para acumular capital y disfrutar de mayores niveles de bienestar. En su conjunto, estas nuevas amenazas a la economía campesina ya son más peligrosas que los antiguos problemas de erosión de las prácticas históricas de reciprocidad y de la autonomía política de las comunidades rurales.

Uno de los aportes más significativos de Thompson y Scott fue resaltar hasta qué punto "los mercados" son construcciones políticas y resultados de lucha social. Esto puede apreciarse retornando por solo un momento a una frase reveladora que se encuentra en la definición de economía moral de Thompson: "Confrontaciones en la plaza de mercado". El término *plaza de mercado*, por supuesto, evoca un sitio concreto. Desde nuestra perspectiva, hoy, a veces es difícil entender que aún en el siglo XIX el mercado por sí mismo a menudo se refirió en principio a un lugar específico donde tipos específicos de productos se almacenaban y comerciaban (Moreno, 1985: 11). Solo más tarde este asumió las cualidades metafóricas y desterritorializadas que cada vez más se le adhirieron. El truco político que acompañó este cambio semántico implicó la creación de instituciones que formaron mercados invisibles, así como forjaron la apariencia de una esfera económica separada y autónoma desvinculada de la sociedad. El gran logro de Adám Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y otros economistas políticos clásicos fue, como demuestra Michael Perelman (2000), promover la extensión a nuevas esferas de mercados "libres", mientras que ellos al mismo tiempo ocultaron la brutal desposesión que acompañó la propagación de tales mercados y promovieron medidas intervencionistas, las cuales contradijeron completamente la doctrina del *laissez-faire* y formaron parte de una estrategia cuya finalidad fue obligar a los pobres trabajar. En verdad, como Joseph Stiglitz subraya en su prólogo a la nueva edición de *The great transformation*, de Karl Polanyi, "los

mercados laborales o de bienes verdaderamente libres nunca han existido" (Stiglitz, 2001: ix).

No obstante, Scott, en *The moral economy of the peasant*, declara que de manera deliberada pone poco énfasis en el rol de las fuerzas del mercado como amenazas a la seguridad de subsistencia de los campesinos porque, a diferencia de las amenazas provenientes de terratenientes o del Estado, aquellas fueron "más o menos procesos impersonales sin algún desempeño humano fácilmente identificable" (1976: 58).[6] Hoy, más que nunca, la mano invisible no tiene cara identificable, y "las confrontaciones en la plaza de mercado", de los campesinos, ocurren ahora cada vez más en mercados desterritorializados, lo cual naturalmente afecta el carácter de sus movimientos contestatorios. Los activistas campesinos contemporáneos dedican mucha energía a la tarea de nombrar e identificar el desempeño institucional que se encuentra detrás de las cada vez más desterritorializadas e invasivas fuerzas del mercado que los sacude desde todos lados.

Instituciones, hogares, mercados e influencias

The moral economy of the peasant (1976) fue una intervención importante en el nuevo campo de los estudios campesinos, en las teorías de la acción colectiva y en los debates sobre la historia del mercado, las instituciones políticas y la naturaleza humana. La guerra en Vietnam, que acabó en una derrota aplastante de Estados Unidos un año antes que apareciera el libro de Scott, fue, por supuesto, el "momento crucial" que contribuyó a finales de los sesenta para el surgimiento de un interés en el campesinado contemporáneo. También importante, si bien más problemático, fue la "gran Revolución Cultural Proletaria" en China; las más pequeñas "guerras de liberación" en América Latina, África y Asia, y la pregunta más amplia de cómo las estructuras agrarias de los países pobres habían formado —y podrían influir en el futuro en— procesos de subdesarrollo y desarrollo (Bernstein y Byres, 2001: 2; Salemink, 2003). Ahora, en los comienzos del siglo XXI, puede ser difícil recordar que hace sólo cuarenta años

6 En *Weapons of the weak*…, Scott sostiene, similarmente, que "la personalización de las causas de sufrimiento" es una dimensión significativa de cómo los campesinos entienden y experimentan "las grandes abstracciones", tales como "capitalismo, imperialismo, o la revolución verde" (1985: 347-348).

este entendimiento de lo campesino como un protagonista histórico importante era el sentido común ampliamente compartido de los académicos, políticos y revolucionarios.[7] *The moral economy of the peasant*, de Scott, apareció hacia el final de una ola de libros fundamentales en los estudios campesinos, y construyó sobre tales trabajos e introdujo insistentemente una nueva dimensión cultural e incluso psicológica de la que carecían algunas veces. *Peasant wars of the twentieth century* (1969) [existe edición en castellano de la editorial Siglo XXI], de Eric Wolf (1969), "un producto de los foros universitarios ("teach-ins") organizados para educar al público estadounidense sobre la guerra en Vietnam" (Roseberry, 1995: 161), analizó seis casos que demostraban el papel central de los campesinos en algunos de los levantamientos más dramáticos en las décadas desde la Revolución mexicana de 1910.[8]

En *The social origins of dictatorship and democracy* (1966), Barrington Moore comparó ocho casos (Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, China, Japón e India) y vinculó relaciones agrarias —y, de modo particular, el destino de las clases reaccionarias de los terratenientes— para distinguir tres vías distintas a la modernidad: la democrático-burguesa, la capitalista-autoritaria y la socialista-revolucionaria. El redescubrimiento y traducción al inglés (y al español) de *Theory of peasant economy* (1966), del economista ruso A. V. Chayanov, enriqueció la comprensión de la

7 Buijtenhuijs (2000) argumenta que la disminución en la atención dada al campesinado por los académicos a finales del siglo XX resultó no solo de la urbanización y los cambios sociales relacionados con ella, sino de la creciente participación campesina en "guerras depredadoras" poco atractivas y de modas científicas sociales cambiantes que condujeron a que los investigadores categorizaron en otros términos lo que ellos en principio habrían visto como "guerras campesinas".

8 Se podría mantener que varios de los movimientos revolucionarios (por ejemplo, Rusia, Argelia y Cuba) que Wolf clasificó como "guerras campesinas" no contaron con el apoyo irrestricto del campesinado. Sin embargo, en la época de los estudios campesinos, los científicos sociales solían ver al campesino como un protagonista histórico de gran importancia Aunque a veces soldados desmovilizados de áreas rurales apoyaron los partidos revolucionarios y ciertamente contribuyeron a acabar con el zarismo en Rusia (Wolf, 1969: 87-89), las insurrecciones de febrero y octubre de 1917 fueron sobre todo urbanas de origen. De forma similar, el Frente para la Liberación Nacional de Argelia auspició una lucha de guerrilla que fue principalmente urbana, respaldada por habitantes de las ciudades, veteranos desafectos, trabajadores y la intelectualidad nacionalista. En Cuba, el Movimiento del 26 de Julio de Fidel Castro ganó a la postre el apoyo de algunos campesinos "medios", pero, como sugiere Wolf, sin "liderazgo externo", acaso habrían logrado poco (1969: 291-294).

dinámica de las propiedades campesinas, identificó formas campesinas específicas de racionalidad económica y encendió polémicas acaloradas sobre si la diferenciación social rural produjo clases distintas de campesinos adinerados y pobres, o, alternativamente, si tales diferencias resultaron de la composición demográfica y la edad de los hogares rurales, con unidades más jóvenes que tienen más niños pequeños y relativamente menos obreros, y así menor riqueza que las unidades más viejas.[9]

Los análisis de Moore y Wolf, de maneras distintas, giraron principalmente alrededor de los Estados y las estructuras agrarias, proponiendo explicaciones sociales para los desenlaces políticos de los procesos históricos. Por ejemplo, Moore consideró "ciertos rasgos agrarios sociales" —tales como una aristocracia débil o la "domesticación" de campesinos mediante su incorporación en formas "apropiadas" de agricultura comercial (o, como en Inglaterra, su desplazamiento casi completo)— como clave en la explicación de por qué algunas sociedades lograron con éxito una modernización democrática burguesa. Otras sociedades, donde la agricultura comercial se basó en la represión de la fuerza de trabajo rural y en las alianzas formadas entre los terratenientes y los industriales emergentes, sufrieron reaccionarias "revoluciones desde arriba" o, donde grandes proletariados rurales existieron y los terratenientes que dominaron el Estado tuvieron una orientación comercial débil, las revoluciones comunistas se dieron desde abajo (Moore, 1966: 414-460). Aunque Moore sostuvo que la reciprocidad entre campesinos y terratenientes, como las expectativas campesinas acerca de la justicia y el riesgo compartido, contribuyeron a la estabilidad política en sociedades agrarias; él consideró la cultura como "una variable interventora" y rechazó firmemente la idea que la experiencia subjetiva de la explotación sólo podía provocar la rebelión (1966: 468-471, 485, 497). Wolf, más que Moore, apuntó a las "disposiciones tradicionales" y al "acostumbrado contexto institucional" como características que redujeron los riesgos de los campesinos; y

9 Sobre el "consumo" del trabajo de Chayanov por académicos interesados en Rusia, Asia y América Latina, véase Bernstein y Byres (2001: 13-15), Hewitt (1984), Roseberry (1993: 333-342) y Shanin (1972). En antropología, quizá el uso más innovador del trabajo de Chayanov se encuentra en *Stone Age economic*s (1972), en el cual Marshall Sahlins sostuvo que los "requerimientos tradicionales del consumo" explicaban la intensificación de los niveles observados de la producción en los hogares "primitivos" y campesinos.

ya subvertidos, produjeron "tensiones sicológicas, económicas, sociales y políticas" que podrían, dadas las condiciones adecuadas, conducir a la rebelión (1969: xiv-xv). En una observación relacionada en un trabajo más reciente (1966), Wolf sugirió que los campesinos tienen que dividir la riqueza que ellos producen entre un fondo de reproducción (para la sobrevivencia biológica), un fondo ceremonial (que refuerza relaciones de solidaridad en el ámbito del poblado) y un fondo de renta para los propietarios de la tierra, prestamistas y el Estado (1966: 4-10). El fondo ceremonial, en esta concepción, consiste de recursos para reforzar relaciones de reciprocidad horizontales (un aspecto de lo que Scott luego llamó "economía moral"). Las conclusiones centrales de Wolf en las guerras campesinas, sin embargo, solo trataron de modo indirecto el impacto vivencial de la erosión en las "prerrogativas tradicionales" y, en cambio, se interesó en el rol prominente de campesinos "medios" (y campesinos "libres" en zonas periféricas) en rebeliones agrarias exitosas y revoluciones. En otras palabras, estos grupos sociales, localizados en modos comparables en sistemas de relaciones de clases, fueron más vulnerables a las amenazas provenientes del mercado y más expuestos a influencias ideológicas originadas en áreas urbanas (1969: 290-295). Wolf no consideró violaciones de disposiciones tradicionales poco importantes para explicar las perturbaciones rurales, sino subrayó más el impacto de cambios en las relaciones de la propiedad y en el manejo de la fuerza de trabajo que la experiencia subjetiva de los campesinos de tales cambios. Chayanov, en contraste con Moore y Wolf, estuvo menos interesado en procesos políticos más amplios que en elucidar las dinámicas de la propiedad, específicamente, la tendencia de familias campesinas tanto de ocuparse de la "autoexplotación", exprimiendo la mano de obra disponible tanto como sea posible para lograr pequeños incrementos en la producción, como para subutilizar el factor trabajo cuando el rendimiento marginal a cada incremento de trabajo resultaba en niveles subjetivamente inaceptables de "trabajo pesado" (Chayanov, 1966: 81-85). El punto de vista de Scott de la propiedad rural en *The moral economy of the peasant* refleja el pensamiento de Chayanov, en particular en su descripción de familias campesinas que buscan una subsistencia estable más que rendimientos máximos de alto riesgo (Scott, 1976: 15-19). Empleando —para él un poco atípicamente— el

lenguaje de la economía neoclásica (tanto como Chayanov), Scott escribe que el trabajo campesino se caracteriza por su bajo costo de oportunidad (i.e., una ausencia de posibilidades de empleo alternativo cercano) y la "alta utilidad marginal de ingreso para aquellos cerca al nivel de subsistencia" (1976: 14-15). Así, dos afirmaciones de Chayanov se destacan como influencias sobre Scott: (1) que existe un nivel subjetivamente inaceptable de trabajo pesado, frente a lo cual los individuos cesan de trabajar, y (2) que el pobre rural se ocupa en una incansable búsqueda de la subsistencia en vez de en la acumulación (aunque, como se notó arriba, un ascenso en el nivel de vida y acumulación ha sido incorporado en muchas expectativas de campesinos contemporáneos acerca de la "subsistencia").

Un objetivo de *The moral economy of the peasant* (1976) es avanzar más allá del enfoque casi exclusivo de Chayanov sobre unidades domésticas y la exclusión de su análisis de otras relaciones sociales, tales como redes de solidaridad basadas en la comunidad rural y el apoyo mutuo. No obstante, según Scott, las percepciones de Chayanov acerca del comportamiento psicológico y económico de las unidades domésticas campesinas permiten entender mejor las grandes transformaciones políticas. Así, con este libro, Scott superó los estudios enfocados en Estados y estructuras agrarias, por un lado, y el estudio interesado primariamente en la familia campesina, presupuestos domésticos, y la división de trabajo y la toma de decisiones en cuanto a género y edad, por el otro lado. Él lo hizo así con mucha mayor atención en el rol de la subjetividad en conflictos políticos que estuvo presente en el trabajo de otros, tales como Wolf, cuyo enfoque histórico-estructural también buscó, de manera un poco diferente, conectar estos diferentes niveles de análisis.

The moral economy of the peasant, así como *Theory of peasant economy* (1966), de Chayanov, presenta un argumento contra los teóricos de la maximización económica, y es aquí que resultan más aparente la intervención de Scott en los debates sobre la acción colectiva. La era de la guerra de Vietnam, a pesar de que diera lugar a un florecimiento de movimientos sociales en todo el mundo, también fue una época en la cual surgieron varios paradigmas influyentes interrelacionados que destacaron la racionalidad autointeresada de actores individuales y la dificultad

—sino imposibilidad— de producir bienes colectivos. Paradójicamente, quizá, ya que miles de manifestantes estaban en las calles, Mancur Olson (1965) argumentó que los individuos (acaso en todos los tiempos y lugares) eran tan racionales que no arriesgarían uniéndose a la acción colectiva porque cada uno podría beneficiarse de la actividad de los otros mediante el seguimiento de estrategias de bajo riesgo, aprovechando como "free riders" ("colados" o "gorrones") egoístas las conquistas logradas por otros miembros del grupo menos racionales o inteligentes que sí se arriesgaron. Como el modelo de "la tragedia de los bienes comunes", de Garrett Hardin (1968) (y el creciente interés de los científicos sociales sobre los juegos del "dilema de prisionero", "el problema del incentivo" y "riesgos morales"), los teóricos del "problema de la acción colectiva" asumieron que la colaboración sólo podría ocurrir si los individuos —cada uno personificando un *Homo economicus* universal y calculador— fueran inducidos a unir a esfuerzos de grupo por medio de recompensas o sanciones.[10] Las críticas del libro de Scott, con mayor fama *The rational peasant* (1979), de Samuel Popkin, empleó este lenguaje de racionalidad individual y de "free riders" para argumentar que para los campesinos el "seguro" de las normas de reciprocidad de las comunidades rurales y las relaciones tradicionales patrón-cliente fueron menos confiables y más favorables las ganancias potenciales de mercados, de lo que habían indicado Scott y otros "economistas morales".[11]

Aunque las limitaciones de espacio aquí impiden analizar en detalle los argumentos de los críticos de Scott, vale la pena observar que ellos a menudo sucumbieron a un romanticismo del mercado bastante parecido al romanticismo campesinista que, según ellos, caracterizó el trabajo de los "economistas morales". Popkin, por ejemplo, afirma que:

10 El modelo del actor racional ha generado considerable escepticismo. Véase, entre muchos ejemplos, Ostrom (1990), sobre administración de recursos de propiedad colectiva, y Tilly (2001), sobre las formas contenciosas de acción colectiva.

11 Entre los otros "economistas morales" que Popkin criticó destacan Wolf, cuyo análisis de la "comunidad corporativa cerrada" (1957: 2; 1986) subrayó la "nivelación" de las diferencias sociales mediante prácticas redistributivas, y Migdal (1974: 69), quien, de manera similar, vio la "economía de prestigio" redistributiva como un mecanismo clave de sobrevivencia para el campesinado.

> mientras la apertura a los mercados internacionales y nacionales sujeta a los campesinos a nuevos y diferentes tipos de incertidumbre, mercados más amplios tienden en el tiempo a mantener precios más estables y suministros de alimento mucho más consistentes... Con la expansión... el 'valor seguro del dinero', esto es, la probabilidad de que el dinero ahorrado en un buen año encontrará alimento para comprar en un mal año, en sí mismo se incrementa y los campesinos tienen una forma de protección la cual ellos no tenían en áreas de mercado más pequeñas. (1979: 72).[12]

El comentario de Popkin es, por supuesto, emblemático de un extremo en un gran debate sobre la sociedad capitalista. En *The moral economy of the peasant*, Scott (1976: 5, n. 8) paga "tributo" al rol "formativo" que la *Great transformation* (1957) de Polanyi jugó en su pensamiento. Aunque esta apreciación no es reconocida de forma explícita en otras partes de *The moral economy*, la visión de Scott de la economía campesina como inserta en un marco de relaciones recíprocas intra e interclases evoca el rechazo de Polanyi de la presunción que la economía constituye una esfera analíticamente autónoma aparte de las instituciones sociales. Scott mantiene que los sistemas de reciprocidad que se establecen en el ámbito de las comunidades rurales, durante un largo tiempo histórico, producen expectativas morales ampliamente compartidas. Las fuerzas del mercado (algunas veces en combinación con las ambientales) plantean desafíos a estas expectativas y podrían, cuando se cruzan los límites de lo culturalmente aceptado, producir rebelión y resistencia colectiva.

Curiosamente, dada la importancia que Scott atribuyó a estas expectativas establecidas durante largo tiempo y las conmociones que acompañan su violación, Popkin le atacó diciendo que el enfoque económico moral considera de manera equivocada a la sociedad campesina como "estable" (1979, 29). William Booth, un crítico más reciente, afirma que esto está "orientado hacia el estado estático" y que "una de las principales insuficiencias del modelo económico moral [... es] que este tiene pocos recursos teóricos con los

12 Contrasta la afirmación de Popkin a la posición de Scott de que "las inseguridades del mercado mundial estaban, en balance, mucho más que aquellas de los mercados tradicionales locales" (1976: 59).

cuales explicar el cambio económico —porque los regímenes económicos llegan a ser y desaparecen—" (1994: 658).

Estas interpretaciones pasan por alto otra influencia significativa sobre el autor de *The moral economy of the peasant*, aunque se trata de una que, como aquella de Polanyi, es poco explícita. En el prefacio de Scott, él reconoce una deuda con la "escuela de historiografía" de la revista *Annales* —en particular con Marc Bloch, Emmanuel Le Roy Ladurie y aquellos investigadores que trabajan con "mentalités populaires" (1976: viii). Los historiadores de *Annales* eran, por supuesto, demasiado conflictivos para constituir una "escuela" coherente —"con un Pontífice, o dos, en la cumbre" (como Lucien Febvre, uno de los primeros editores de la revista, una vez comentó [Aguirre, 1999: 12]). Además, en diferentes periodos, los enfoques que dominaron al grupo de *Annales* variaron de forma considerable, desde los estudios meticulosamente detallados sobre la vida rural de Bloch y Le Roy Ladurie a la historia antropológica de los estudiosos de "mentalités populaires". Aunque el interés por la subjetividad del último grupo evoca el énfasis de Scott sobre la importancia de las expectativas culturalmente definidas sobre niveles de vida (y con el análisis de Chayanov sobre el trabajo pesado), una tercera tendencia de *Annales* —la historia serial de *longues durées* desarrollada en trabajos pioneros por Ernest Labrousse y vuelta famosa por Fernand Braudel— también revelaron temas que figuran como sustentos analíticos importantes de *The moral economy of the peasant*, de Scott. Me parece que esto es en particular evidente en la consideración que hace Scott de los factores que median entre las crisis de subsistencia y las rebeliones campesinas.

Crisis de subsistencia

El concepto de "crisis de subsistencia" a buen seguro tiene una genealogía que se remonta al Neolítico. Plagas en los cultivos, infestación de pestes, inundaciones, sequías y heladas han frustrado a los agricultores y contribuido a trastornos sociales durante diez milenios. En las ciencias sociales contemporáneas, "la crisis de subsistencia" e ideas similares han traído a cuento la tensión entre la medida cuantificable y la experiencia subjetiva

de la escasez que Scott maneja de forma tan hábil en *The moral economy of the peasant*. La historia sería practicada por la escuela de los *Annales* con un nuevo énfasis en la elaboración de gráficos de precios y salarios, rendimientos agrícolas, alquileres de la tierra y costos de vida, y en la identificación de tendencias estacionales, cíclicas y de larga duración. Aunque esto no significó una ruptura completa con los enfoques anteriores de Bloch y sus colaboradores, tendió a reemplazar la atención sobre el uso de la tierra, tecnología agrícola, sistemas de propiedad y el estatus jurídico de la mano de obra rural. Aun cuando los proponentes de la nueva historia serial afirmaron estar buscando alternativas al reduccionismo económico estéril, la misma naturaleza de sus fuentes y procedimientos de investigación algunas veces los llevaron a plantear interpretaciones que restaron importancia a las mediaciones culturales y políticas de las crisis de subsistencia, en particular cuando estas conducían a la acción colectiva.

Ernest Labrousse, por ejemplo, uno de los pioneros de la historia serial cuantitativa (y una figura líder en el grupo de *Annales*) preguntó, en una de sus primeras obras, si existía en Francia en 17889 una "revolución de la miseria o de la prosperidad". Él procedió a invocar como una causa inmediata de la Revolución francesa a dos años de "crisis de subsistencias" que condujeron a demandas fiscales incrementadas y que frustraron las crecientes expectativas (entre el campesino, el proletariado y la burguesía), generadas durante un periodo mucho más largo de expansión económica (Labrousse, 1962: 365-366). De forma similar, Enrique Florescano atribuye la guerra de independencia mexicana de 1810 en gran parte a las precedentes crisis agrícolas y hambrunas, a pesar de que también demuestra que las luchas campesinas de la época casi siempre emplearon discursos de economía moral (1969: 172-179).[13]

Explicaciones como estas —y el término *crisis de subsistencia* en sí mismo— plantean un gran número de interrogantes. Primero, por supuesto, sobre la validez empírica y la interpretación de las series de los datos mismos. Le Roy Ladurie, por ejemplo, calificó la descripción de Labrousse de la Revolución

13 Evocando a Labrousse, Florescano declaró: "La revolución de independencia [en México] como la Revolución francesa, estalla en medio de una tempestad de altos precios. Así culminó el ataque sucesivo de las crisis agrícolas sobre las débiles estructuras de la sociedad colonial" (1969: 179).

francesa como "debatible" y "no convincente", y preguntó por qué las conclusiones de su trabajo habían sido "piadosamente repetidas durante casi medio siglo" (1996: 491, n. 50). Segundo, la historia serial fue a menudo notable por lo que eligió o dejó fuera del análisis. El rol de las Guerras Napoleónicas en el debilitamiento de la ocupación española sobre sus colonias americanas, para citar otro caso, recibió escasa mención en el análisis de Florescano del periodo anterior a la independencia mexicana. Tercero, el término subsistencia, en especial, pero no solo cuando se aplica a agricultores contemporáneos, sugiere granjeros autárquicos dedicados al autoaprovisionamiento o "campesinos de subsistencia" y tiende a oscurecer la relación con el mercado que podrían tener pequeños productores, en particular en años de altos rendimientos y sobreproducción (o en años de bajos rendimientos, como consumidores de alimentos básicos comprados a altos precios).[14]

Cuarto, y más importante, reduciendo la distancia analítica entre los gráficos de movimientos de precio y los trastornos revolucionarios, arriesgó en simplificar las complejidades de las expectativas populares, las relaciones sociales y aun la "naturaleza humana" en sí misma. De acuerdo con Thompson, esto fue una manifestación:

> … del clima intelectual esquizoide, que permite a esta historiografía cuantitativa coexistir (en el mismo lugar y algunas veces en las mismas mentes) con una antropología social que deriva de Durkheim, Weber o Malinowski. Sabemos todo acerca del delicado tejido de normas sociales y reciprocidades que regulan la vida de los isleños de las Trobriand y las energías físicas involucradas en los cultos de cargo de Melanesia, pero en algún punto esta criatura infinitamente social compleja, el hombre melanesio, llega a ser (en nuestras historias) el minero inglés del siglo XVIII, quien se da una palmada espasmódica en el estómago y responde a un estímulo económico elemental (1971: 78).

14 Scott es claramente consciente de esta dinámica (1976: 114), aunque en *The moral economy of the peasant* él analiza cómo los campesinos, forzados a elegir entre las opciones de la producción de subsistencia y la siembra de cultivos riesgosos, casi siempre buscan un rendimiento mínimo que sea más confiable (1976: 20-21). En gran parte del libro, él aparece interesado sobre todo en productores que tienen sólo una orientación comercial limitada, indirecta e intermitente, como cuando se refiere a la "venta de una porción de los cultivos de los campesinos (a menudo en la forma de un préstamo repagado con una porción de la cosecha)" (1976: 114).

Si la "economía moral" (y la "historia cultural" inglesa) emergió así como una alternativa a la historia económica reduccionista o "espasmódica", la incorporación de una mayor complejidad, de forma inevitable, generó tensiones analíticas.[15] En *The moral economy of the peasant*, Scott desarrolla los conceptos de "nivel mínimo de subsistencia" y "crisis de subsistencia" como parte de un esfuerzo para entender el impacto de la *longue durée* sobre la vida diaria. Él ilustra la inestabilidad de la agricultura campesina a lo largo del tiempo (una dimensión de su trabajo en gran medida pasada por alto por críticos tales como Popkin y Booth —véase arriba—) y la consistencia de las afirmaciones de las elites sobre esto tanto con series de datos hipotéticos como históricos (Scott, 1976: 15-16, 29-31, 118-120).[16] A veces atribuye mucha importancia a las tendencias mismas, como cuando él indica la probabilidad de que el ingreso per cápita y los precios del arroz declinaron en Vietnam en el periodo 1900-1940, algo que explica los grandes levantamientos campesinos que ocurrieron en los años treinta en las regiones norte y centro-norte del país (también en la parte sur de Birmania, de manera similar impactada por la depresión de los treinta) (1976: 56-57, n. 1; 120).

Pero cuando Scott emplea tal razonamiento, este se encuentra al servicio de un argumento más sutil acerca de la interacción entre los indicadores objetivos y las experiencias subjetivas que forma la "crisis de subsistencia". De acuerdo con Scott, a comienzos del siglo XX, en el sudeste asiático, las crisis de subsistencia surgieron como un resultado de fluctuaciones en rendimientos naturales, precios del mercado mundial y precios de "monocultivo" (1976: 197), todo combinado con una experiencia subjetiva de

15 En un trabajo anterior, refiriéndose al periodo de los comienzos de la Revolución Industrial en Inglaterra, Thompson declaró que "algunos de los conflictos más amargos de estos años trataron sobre temas que no se pueden explicar por las series de costos de vida" (1966: 203).

16 Un "nivel de subsistencia", escribe Scott, "supone un patrón de preferencias alimentarias y, por lo tanto, está determinado culturalmente" (1976:17 n. 10). Orlove, en un importante artículo que analiza las implicaciones políticas de este punto para el Chile de principios del siglo XX, critica a Thompson por prestar escasa atención a tales preferencias (1997:236). Aunque Thompson sí señala los «sentimientos de estatus» asociados al consumo de pan blanco, su análisis hace hincapié en el interés de los panaderos y molineros por producirlo en lugar del "pan de los pobres" —panes más gruesos de grano integral o sin trigo—, cuyos precios estaban regulados y que eran rechazados por los clientes más acomodados, que sospechaban que estaban adulterados (1971:80-81).

cada evento y respuestas de la elite a esta, que condujo a los campesinos a ver todo como una violación del orden moral. "Más allá de […] las necesidades fisiológicas brutas", escribe, "hay claramente una dimensión histórica para los niveles de subsistencia en la cual los estándares mínimos tienen alguna relación con la experiencia previa" (1976: 17).

¿Cómo ha cambiado el carácter de la crisis de subsistencia a finales del siglo XX y comienzos del XXI, y con qué efecto político? En muchos lugares, la participación campesina en los mercados sólo se ha intensificado en décadas recientes. Para pensar acerca de lo que significa una "crisis de subsistencia" hoy en día, el énfasis de Scott sobre la fluctuación de precios y rendimientos podría ser un poco demasiado específico desde el plano histórico. La tendencia secular a la baja en los precios de muchos productos agrícolas comerciados internacionalmente ha durado veinte años o más —esto es, casi una generación—.[17] Todavía existen *booms* ocasionales en mercados particulares (por ejemplo, el de la soya), pero la periodicidad en los precios agrícolas, en particular de alimentos básicos y productos comerciados internacionalmente (cereales, aceites, café, algodón, azúcar y cacao), parecen haber disminuido de modo sustancial o, en algunos casos, aun desaparecido (FAO, 2000; World Bank, 2005). Hay pocas razones para suponer que la tendencia a la baja en los precios se invertirá en sí misma más que de momento, dados los vínculos siempre crecientes entre mercados, tecnologías de alto rendimiento que llenan los silos y depósitos que inundan los mercados, la persistencia —a pesar de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y todo el discurso neoliberal— de los subsidios de exportación de la Unión Europea y los Estados Unidos, el *dumping*[18] y los esfuerzos de las grandes corporaciones agroindustriales por bajar los precios de venta que reciben los productores.

Una helada en las regiones cafeteras de Brasil, por ejemplo, solía ser la causa de regocijo en Colombia, Centro América y África Oriental, pero ya no.

---

17 Aunque las causas de la disminución de precios (y niveles de volatilidad) varían para diferentes productos, la bajada simultánea de los precios de tantos productos distintos, en particular desde mediados de los noventa, no tiene precedentes históricos.

18 El *dumping* se refiere a la práctica de vender productos en el extranjero por debajo de su costo de producción, típicamente en un esfuerzo por ganar cuotas de mercado o socavar a los competidores locales. El *dumping* todavía ocurre, a pesar de que esté prohibido bajo las normas de la OMC.

Además, la helada de 1994 en Brasil solo produjo un impacto mínimo sobre los precios internacionales del café (World Bank, 2005: 304). En la década pasada, Vietnam e Indonesia, países tradicionalmente bebedores de té instados a producir café por el Banco Mundial, inundaron los mercados de tal manera que muchos productores de café en América Latina y el África oriental simplemente han dejado de recolectar el grano.[19] En muchos países productores de café, el desmantelamiento —como una consecuencia de reformas neoliberales— de agencias estatales de mercadeo ha significado que los mecanismos de control de oferta sean difíciles o imposibles de hacer cumplir. Las historias para otros productos son diferentes, pero el panorama general es similar. La crisis de subsistencia ha llegado a ser un estado permanente.

El campesinado cambiante

Los campesinos de hoy no son los mismos que los de los años sesenta y setenta, cuando los "estudios campesinos" comenzaron a ocupar un lugar importante en las ciencias sociales en América Latina, Asia, África, Europa y América del Norte, ni son por completo los mismos campesinos de *The moral economy of the peasant* de Scott. En particular, desde la sacudida de la economía global señalada por el colapso del Bretton Woods de 1970, el sistema de intercambio fijo y los controles sobre movimientos del capital (Helleiner, 1994), el mundo rural ha experimentado crisis interconectadas más profundas. En muchas sociedades, la urbanización ha disminuido la influencia política de áreas rurales y ha contribuido a la reconfiguración, y a veces a la desintegración de empresas campesinas.[20]

19 También importante en el caso del café después de 1989 es el colapso como resultado de desacuerdos entre países miembros del sistema de cuotas de exportación obligatorias en el Acuerdo Internacional del Café.

20 Los aspectos poco notados y subteorizados de esta tendencia, sin embargo, incluyen la "recampesinización" (Edelman, 1999: 205-207) y la dispersión de una proporción creciente de la población rural en un número creciente de comunidades remotas y cada vez más pequeñas. Warman, quien describió el último fenómeno para México, resaltó, algo románticamente, que "representa una resistencia a la urbanización, una manera de reproducir la vida sin cambiarla, para que siga siendo como antes, como siempre, aunque nunca sea igual" (2001: 41).

En 1976, el antropólogo mexicano Arturo Warman ya escribía de la "dialéctica endemoniada" que atormentó a los campesinos de México central:

> Por ser "modernos" y sembrar frutales injertados, fertilizar con fórmulas químicas, cosechar productos que son demasiado caros para que ellos los consuman, los campesinos han tenido que hacerse más "tradicionales". Tienen que sembrar el maíz que van a comer, realizar gastos ceremoniales, hacerse de compadres, establecer relaciones recíprocas para el intercambio directo, no capitalista, de trabajo y de recursos productivos. Hasta tienen que crecer, reproducirse para hacer más grande el tamaño de su fuerza de trabajo que aporta excedentes (Warman, 1976: 15).

En México y otros sitios, la situación hoy es por lo regular más severa y el ritmo de explotación más alto que cuando Warman escribió acerca de Morelos. En *The moral economy of the peasant*, Scott (1976: 85) señala los "choques duros conectados al mercado mundial" como fuerzas que destruyeron la seguridad de subsistencia en el Asia de comienzos del siglo XX, pero él se refiere sobre todo a mercancías agrícolas y, en segundo lugar, a mercados de crédito. Hoy, intervenciones múltiples e intensificadas en los mercados —de mercancías, crédito, tecnología, tierra y servicios de todo tipo— han traído vulnerabilidades crecientes e interconectadas. Cuando los campesinos adoptan tecnologías modernas, aun cuando las emplean en sistemas de cultivo tradicionales, tiende a profundizar la dependencia en los mercados y a empeorar las múltiples catástrofes ambientales y de salud a menudo asociadas con la agricultura industrial. Las "crisis de subsistencia" por sequías, inundaciones, insectos, plagas de cultivos, enfermedades de animales, y la caída en picada de precios, todavía ocurren, pero están intensificadas por nuevos riesgos y mayor incertidumbre, y por los fuertes impactos de dos décadas de liberalización económica y reestructuración institucional. El efecto acumulativo de los "choques rudos" de hoy es quizá más violento y brusco que en el sureste de Asia de los treinta. El descenso secular en los precios agrícolas mencionado antes es parte de esto, pero así son privatizaciones de bancos de desarrollo estatales, agencias de extensión y de compraventa de productos agrícolas, y la siempre creciente concentración e integración vertical de las corporaciones gigantes que suminis-

tran los insumos y controlan la parte del león de los mercados globales de productos agropecuarios. La desaparición de subsidios antes proveídos por ahora debilitados Estados de bienestar, aún en algunos países menos desarrollados, ha dejado a los pequeños productores todavía más a la merced de prestamistas locales, intermediarios y fuerzas invisibles distantes y cada vez más caprichosas. El debilitamiento y retroceso de las reformas agrarias, que las elites detestan como obstáculos para el juego libre de las fuerzas del mercado, han contribuido a reducir la base de tierra campesina y a destruir la esperanza (Zoomers y van der Haar, 2000). El empleo no agrícola y la actividad empresarial e informal han llegado a ser esenciales para la sobrevivencia de los pobres rurales casi en cualquier lugar.[21]

Dado este panorama desolador, no sorprende que diásporas de personas rurales se hayan diseminado por todo el mundo, lo cual impactó la vida rural y dio lugar a nuevas formas de hacer política, además que transformó los imaginarios campesinos. Los campesinos de hoy, cuando permanecen en la tierra, con frecuencia han tenido que aprender no solo acerca de fertilización con químicos o injerto de árboles frutales, como sugirió Warman, sino también acerca del lenguaje de banqueros y abogados, inteligencia de mercados y computadoras, administración de empresas y medidas fitosanitarias, biotecnología y propiedad intelectual, y al menos algunos elementos de comercio global y macroeconomía. Ellos han tenido que volverse sofisticados y cosmopolitas.

En años recientes, las culturas urbana y rural han convergido en tantos sentidos que es necesario considerar la posibilidad de una nueva economía

21 Algunos científicos sociales, en particular, pero no solo de Europa, celebran este fenómeno como "la nueva ruralidad" o "la ruralidad posindustrial". Si las áreas rurales una vez proveyeron trabajo, alimento y materias primas para el sector industrial, bajo la "nueva ruralidad", el campo experimenta crecimiento en los sectores de servicios y manufactura, los cuales ya no requieren más el mismo grado de concentración espacial como ocurrió durante el apogeo de la economía "fordista", cuando la mano de obra se empleaba de forma mayoritaria en grandes fábricas, trabajando en la cadena de montaje. Según los teóricos de la nueva ruralidad, las familias de agricultores dependen en la actualidad más de "pluriactividad" que de la agricultura (Eikeland, 1999; Llambí, 2000; Marsden, 1995). La relevancia de este paradigma para la mayoría de las sociedades en el Sur global es, obviamente, muy limitada, en especial en el caso de aquellas donde las industrias antaño basadas en las ciudades del Norte "posindustrial" ahora se han asentado.

moral rural contemporánea, informada por un imaginario urbano y expectativas de consumo urbanas. Hasta cierto punto, esta convergencia, el alza en el "nivel mínimo de subsistencia" mencionada antes, resulta de cambios demográficos que crean nuevas tensiones internas para las familias campesinas. Para el campesino, expandir el tamaño de la "fuerza de trabajo que aporta excedentes" (como señala Warman) ya no es un asunto simple. Aun en áreas rurales, mejoras en el acceso a la educación primaria y secundaria, la creciente dependencia en el empleo fuera de la finca y la disminución en fertilidad promedia reducen el número de obreros familiares disponibles e intensifica presiones sobre aquellos quienes aún están produciendo para proveer un cada vez más elevado nivel de consumo para el hogar entero. Esto, a su vez, crea tensiones dentro de la familia y limita las posibilidades de participar en diversos tipos de esfuerzos colectivos. Al mismo tiempo que las expectativas de los campesinos han crecido, en muchos países menos desarrollados la brecha rural-urbana —en niveles de vida, consumo, oportunidades— solo se ha ampliado. Esta combinación de expectativas crecientes y oportunidades de vida que, al menos en el campo, están disminuyendo, tiene consecuencias potencialmente explosivas. Como señala el escritor uruguayo Eduardo Galeano: "La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito" (1998: 25). O, uno podría sugerir, en oportunidades para la acción colectiva.

"No hay mercado mundial": economía moral y los movimientos campesinos de hoy

Polanyi vio el "contramovimiento" o resistencia que siempre acompañó al avance de la "sociedad de mercado" como algo característico del ámbito local o quizá el nacional (1957: 130-134). De modo similar, Scott habla del aspecto moral de las normas redistributivas del poblado. En *The moral economy of the peasant* (1976), Scott subraya que "el desarrollo del capitalismo, la comercialización de relaciones agrarias y el crecimiento de un Estado centralizador representan el conjunto histórico de causas

de las revueltas campesinas en la era moderna. Sobre todo, estas grandes fuerzas históricas atraviesan el tejido de las costumbres de subsistencia y las relaciones sociales tradicionales para reemplazarlas con contratos, el mercado y leyes uniformes" (1976: 189).

En las pasadas tres décadas, sin embargo, desde la ruptura del sistema Bretton Woods, que marcó el comienzo de la era de la globalización (y desde la publicación de *The moral economy of the peasant*), han ocurrido aún otros intentos para separar el intercambio económico de las relaciones sociales en las que está enraizado y, a la vez, una "desmoralización de la teoría del comercio y el consumo" (para usar la descripción de Thompson (1971: 89) de la revolución del *laissez-faire* de finales del siglo XVIII). Si el Estado se ha debilitado debido a la globalización o simplemente ha asumido nuevas funciones, no es a menudo el adversario principal de los movimientos contra el mercado. Nuevas instituciones de gobernabilidad supranacional —tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)— se han convertido asimismo en adversarios importantes.

Los movimientos campesinos de las pasadas dos décadas reflejan esto y con frecuencia han adoptado nuevas formas transnacionales que no previeron los académicos de los estudios campesinos de los años sesenta y setenta. Los movimientos campesinos en diferentes países y regiones que hace solo una década apenas sabían de la existencia de otros, ahora intercambian información y delegaciones, y realizan en conjunto programas de investigación, acciones de protesta y otras gestiones. El éxito del Movimiento Brasileño de los Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra [MST]), que presiona por una reforma agraria, ha influido en organizaciones campesinas por toda América Latina y aun en Sudáfrica. Redes globales de organizaciones de pequeños agricultores tales como Vía Campesina y APM-Mondial (Réseau Mondial Agricultures Paysannes, Alimentation et Mondialisation) vinculan coaliciones de grupos nacionales que operan dentro de Europa, América Latina, Asia y África. Con sus propios recursos, algunas veces escasos, y el respaldo adicional de organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones europeas (y unas cuantas de otras partes), han llegado a tener un alto perfil en el movimiento de justicia global,

incluyendo los Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre y Mumbai y las protestas anti-OMC en Seattle, Cancún y otros lugares (Edelman, 2003). Sus organizaciones también han contribuido a derrocar Gobiernos nacionales, como en Ecuador en 2000 y Bolivia en 2003.

La historia de la formación de movimientos y redes trasnacionales de campesinos y pequeños agricultores solo puede ser esbozada aquí.[22] El ímpetu inmediato para la formación de estas organizaciones fue la crisis agrícola mundial de los ochenta, provocada por la rápida liberalización del comercio agrícola global. Las organizaciones de pequeños agricultores temían — acertadamente, como aconteció después— que un régimen comercial más liberal conduciría a precios más bajos para los productos agropecuarios, la consolidación de un sector de agroindustrias gigantes, una homogeneización del sistema alimentario global y la erosión de los mecanismos de control de oferta y subsidios públicos para la agricultura. Algunos pequeños agricultores, tal como predijo Popkin (véase arriba), se adaptaron a la nueva economía globalizada e ingresaron a nichos de mercados internacionales. Mucho más, como indica Scott (1976: 59), considerando un periodo anterior en Asia, encontraron las inseguridades de la nueva situación económica más grandes de las que ellos tradicionalmente enfrentaron en mercados locales o nacionales protegidos con aranceles altos.

La creación de redes trasnacionales de pequeños agricultores ocurrió no sólo como resultado de las amenazas provenientes de la globalización económica, sino también de una globalización de normas económicas morales. A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en Europa, Norte y Centroamérica, el avance de la integración económica regional condujo a los pequeños agricultores a formar coaliciones transfronterizas con contrapartes en países vecinos. En India, las organizaciones campesinas se opusieron a que los grandes monopolios del sector agropecuario se adueñaron o patentaran variedades de cultivos que pequeños agricultores habían reproducido de modo selectivo durante cientos de años, tales como el arroz basmati o las semillas del árbol nim (el cual produce un excelente pesticida). Sus protestas atrajeron

22 Tratamientos más detallados incluyen aquellos de Borras (2004), Desmarais (2002; 2003) y Edelman (1998, 2002; 2003).

la atención mundial en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS, Trade-Related Intellectual Property Agreement, parte del GATT [General Agreements on Tariffs and Trade]), el cual llegó a ser una parte de la OMC en 2004. Agricultores europeos disputaron con corporaciones gigantes que buscaron reclamar propiedad exclusiva de las culturas de quesos añejos o que falsificaron quesos locales para desplazar del mercado a los queseros tradicionales. A comienzos de 1990 en Europa, la ronda final de negociaciones del GATT provocó enormes manifestaciones, algunas de las cuales contaron con la participación de agricultores de Asia, África y las Américas, así como de toda Europa. En 1993, mientras las protestas anti-GATT crecieron en Europa, representantes de organizaciones de campesinos y pequeños agricultores de varias docenas de países se reunieron en Bélgica y fundaron una coalición transnacional llamada Vía Campesina (Edelman, 2003: 204-205).[23]

En solo unos pocos años, Vía Campesina había afiliado alrededor de ochenta organizaciones en unos cincuenta países. Su membresía es altamente heterogénea, "abarcando desde pequeños productores de lácteos en Alemania a campesinos sin tierra en Brasil; de agricultores comerciales en Karnataka (India) a campesinos pobres en México; desde trabajadores agrícolas en Nicaragua a agricultores de arroz en el sur de Corea" (Borras, 2004: 9). En el plano ideológico, Vía Campesina es también diversa, y con frecuencia grupos participantes no están de acuerdo sobre cuestiones estratégicas, aunque todos comparten una amplia oposición al neoliberalismo (aunque algunas veces por diferentes razones y con diferentes grados de flexibilidad o intransigencia). Desde 1995, cuando representantes de Vía Campesina acudieron a la Asamblea Global sobre Seguridad Alimentaria en la ciudad de Quebec, la coalición ha tenido un aumento en su perfil internacional (Desmarais, 2002: 103). Durante la década siguiente, Vía Campesina y sus organizaciones miembro han organizado y participado en docenas de "cumbres paralelas", foros de ONG y conferencias internacionales sobre alimentos, agricultura y tenencia de la

23 Los activistas de Vía Campesina emplean de modo deliberado los términos *farmer* y *peasant* (o campesino o *paysan*), intercambiablemente, para resaltar los problemas comunes de pequeños agricultores en países desarrollados y menos desarrollados. Yo sigo esta práctica aquí por razones que he elaborado en detalle en otro trabajo (Edelman, 2003: 187).

tierra. Aunque a veces los grupos miembro han gestionado y presionado a Gobiernos nacionales alrededor de temas como los derechos humanos y la reforma agraria (Edelman, 2003: 206-212), Vía Campesina aún considera que las movilizaciones de masas deben ser su principal estrategia (Borras, 2004: 24). Al mismo tiempo, sin embargo, la coalición y muchas de sus organizaciones constituyentes practican de manera consciente una flexibilidad táctica y de "cambio de locación", buscando las locaciones locales, nacionales o internacionales —institucionales y geográficas— que les permitirá presionar efectivamente, o de algún modo alcanzar los objetivos clave.[24]

¿Cuáles son los proyectos de estos campesinos y organizaciones de pequeños agricultores trasnacionales y cómo reflejan sensibilidades económicas morales? Aquí, de nuevo, por razones de espacio, solo puedo empezar a esbozar una respuesta. Las demandas y campañas políticas de Vía Campesina se enfocan en derechos humanos, reforma agraria, ambiente y agricultura sostenible, biodiversidad y recursos genéticos, reformas del Estado y comercio, entre otros temas. Muchos de estos esfuerzos interrelacionados indican que las economías morales siguen siendo importantes para entender las protestas campesinas, aunque solo dos serán consideradas aquí. El primero es el llamamiento por sacar la agricultura de la jurisdicción de la OMC; la segunda es la campaña por la "soberanía alimentaria", un concepto sobre el cual retornaré brevemente.

El llamamiento por "sacar a la OMC de la agricultura y el sector alimenticio", escuchado con una frecuencia que se incrementa desde la protesta de Seattle en 1999 y en el comienzo de la ronda de la OMC en Doha, a comienzos de 2000, se basa en diversas premisas: (1) Que la producción agrícola no se trata solo de producción de mercancías, sino es un medio de sustento y

24 Van Rooy (2004: 20) señala que todos los movimientos sociales tratan de trabajar en distintos ámbitos geográficos e instancias institucionales, pero que esto tiende a intensificarse cuando participan en redes transnacionales. Borras (2004: 4-5) describe a las organizaciones de Vía Campesina como "policéntricas", con centros de poder localizados en los planos local, regional, nacional e internacional. Las redes que los unen, tales como Vía Campesina, son —dice— tanto "actores" como "sitios de acciones," porque ellos se ocupan de movilizaciones y otras formas de presión mientras, al mismo tiempo, sirven como foro para debates e intercambios de experiencias entre grupos e individuos participantes (2004: 4-5).

alimentación para campesinos y pequeños agricultores;[25] (2) que debido a que la mayor parte de la producción agrícola mundial se consume en el ámbito doméstico, las normas del comercio global deberían incluir sólo aquella porción que se comercia internacionalmente;[26] (3) que "no hay 'mercado mundial' de productos agrícolas" (Vía Campesina, 2001: 6) sino, más que eso, un comercio internacional en los excedentes de leche, cereales y carne, producidos sobre todo por la Unión Europea, Estados Unidos y miembros del Grupo Cairns;[27] y (4) que "la OMC es antidemocrática e irresponsable, ya que ha incrementado la desigualdad y la inseguridad global, promueve patrones de consumo y formas de producción no sostenibles, amenaza la diversidad y debilita las prioridades sociales y ambientales" (Vía Campesina, 2001: 6). Para Vía Campesina y sus colaboradores, "sacar a la OMC de la agricultura" no solo significa descarrilar el Acuerdo sobre Agricultura (AoA), sino también remover o enmendar cláusulas relevantes en todos los otros acuerdos de la OMC, incluyendo TRIPS, el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (General Agreement on Trade in Services [GATS]), Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Sanitary and Phytosanitary Measures [SPS]), Restricciones Cuantitativas (Quantitative Restrictions [QR]), y Subvenciones y Medidas Compensatorias (Subsidies and Countervailing Measures [SCM]).

25 De manera similar, la campaña de reforma agraria de Vía Campesina, la cual buscaba presentar una alternativa al modelo de reforma agraria basado en el mercado del Banco Mundial, declara que ésta rechaza "la ideología que solo considera la tierra como mercancía" (Borras, 2004: 11). El argumento evoca el concepto de Polanyi de "mercancías ficticias": "Lo que llamamos tierra es un elemento de naturaleza inextricablemente entretejida con instituciones del hombre. Aislarlo y formar un mercado por fuera de esto, era quizá lo más raro y extraño de todas las acciones de nuestros ancestros" (Polanyi, 1957: 178, 72-73).

26 Vía Campesina y sus colaboradores sugieren con frecuencia que solo diez por ciento de la producción agrícola del mundo se comercia internacionalmente (Coordination Paysanne Européenne [CPE], 2004; Simpson *et al*., 2004; Vía Campesina, 2001: 6). Los informes de la FAO, sin embargo, indican que "alrededor de un tercio de la producción agrícola del mundo se comercia internacionalmente" (FAO, 2000). La proporción de la producción total comerciada internacionalmente varía mucho por producto, desde 94% del café (en 1996) hasta 20% del trigo y 5% del arroz (FAO, 2000).

27 El Grupo Cairns consiste en diecisiete países (incluyendo Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), con sectores de agricultura moderna de exportación y mínimos subsidios agrícolas. En las negociaciones de comercio internacional se ha presionado por la reducción y eliminación de subsidios de exportación y otros subsidios agrícolas.

Aunque el Acuerdo sobre Agricultura permite a Gobiernos nacionales alguna libertad de acción para proteger a sus productores y proporciona "tratamiento especial y diferencial" para las naciones miembro de la OMC menos desarrolladas, en general favorece una rápida eliminación de tarifas y una dramática aceleración en la liberalización comercial. La Unión Europea y Estados Unidos, sin embargo, solo han tenido que hacer reducciones menores en sus vastos programas de subsidios. Ellos han podido argumentar que los programas de ayuda a los ingresos desconectada (*decoupled income support*), en los cuales el agricultor recibe una subvención, que no se calcula en función de la cantidad de su producción o de los precios, causan poca o ninguna distorsión del mercado. En contraste, Vía Campesina ha mantenido que tales subsidios de "caja verde" (*green box*) son en realidad subsidios ocultos de exportación y que van, en su mayoría a grandes productores, lo cual los coloca de manera injusta en ventaja.[28] Los activistas campesinos guardan especial desprecio por el artículo del Acuerdo sobre Agricultura que prohíbe que los países miembro utilicen los mecanismos de solución de controversias de la OMC para protegerse contra el *dumping.* Aunque la OMC prohíbe el *dumping* (con sanciones débiles) como una de las prácticas más injustas y que más distorsiona el comercio, el problema persiste, un resultado claro de las políticas de subsidios de la UE y los EE. UU. En general, sin embargo, las organizaciones campesinas han sido reacias a atacar los subsidios agrícolas de los países desarrollados excepto cuando éstos impactan los precios internacionales de productos, el *dumping* y el acceso al mercado de los productores de los países menos desarrollados. Esta reticencia no resulta de un temor de que

28 La OMC categoriza muchos tipos de subsidios agrícolas en "cajas" "ámbar", "verde" y "azul". La "caja ámbar" (como la precaución señalada por el color ámbar de un semáforo) incluye subsidios considerados distorsionadores del mercado y que deben reducirse, tales como precios de garantía o subsidios directamente relacionados con el tamaño de las cosechas. Los subsidios de "casilla verde" permitidos son sobre todo subvenciones al ingreso directo del agricultor que no se vinculan a productos particulares, al igual que pagos por servicios ambientales. La "caja azul" contiene subsidios tipo "caja ámbar", que requiere que los agricultores limiten su producción. Los subsidios de las cajas "verde" y "azul" no están sujetos en general a topes o límites nacionales. Aproximadamente dos tercios de los subsidios de Estados Unidos se hallan ahora en la "caja verde" y un tercio en la "caja ámbar," mientras que en los programas de la Unión Europea cerca de la mitad se encuentra en la "caja ámbar" y un cuarto en cada una de las cajas "verde" y "azul".

el tema de los subsidios pueda dividir las organizaciones campesinas en los países desarrollados, especialmente de Europa, de aquellas en países más pobres (aun cuando en Europa, como en Estados Unidos, la mayor parte de los subsidios va para los grandes productores). Como explica en entrevista Rafael Alegría, activista hondureño y coordinador de Vía Campesina (1996-2004):

> Nosotros no podríamos estar en contra del subsidio como organización, porque precisamente eso es lo que les permite vivir, sobrevivir a los agricultores europeos. Pero más que el subsidio, es el precio justo. Y de eso hay plena conciencia de los pequeños agricultores no solamente franceses, europeos. Dicen: "Nosotros renunciamos al subsidio, pero queremos precios rentables, precios justos que ahora no los temenos". No los tienen. Y quien se queda con la mayor parte del subsidio son precisamente las multinacionales, ¿verdad? Que aprovechan y compran barato, almacenan y después venden. En Europa, la estrategia de Vía Campesina y los pequeños agricultores es común. Reorientar, digamos, el modelo de agricultura de agroexportación, el modelo de agricultura altamente industrializado, modernizado. ¿Hay conciencia en los pequeños agricultores de eso? Sí, por una agricultura más campesina, más sostenible, más de mercado interno. Porque ese otro modelo de agricultura de Europa o de los países industrializados es precisamente lo que destruye los mercados locales, nacionales. Es lo que produce el famoso *dumping* económico y social que le llamamos nosotros (entrevista con el autor, 2001).

Los comentarios de Alegría destacan las bases fundamentalmente morales de la movilización campesina trasnacional contemporánea. "Precios justos", en particular, es una reivindicación típica de los principios económicos morales que Scott describió para el sudeste Asiático de comienzos del siglo XX. En el comentario de Alegría, sin embargo, esta se invoca como una norma trasnacional o aun universal, más que local o nacional. Algunos de los actores han cambiado y el ámbito social relevante se ha ensanchado para abarcar los mercados globales, pero la conducta "justa" por el más poderoso es una aspiración que todavía forma parte de la economía moral implícita de activistas campesinos contemporáneos. El lenguaje que utilizan —más complejo que a comienzos del siglo XX— sugiere que tienen un conocimiento pormenorizado de aspectos

esotéricos de las políticas de comercio; "dumping", por ejemplo, a pesar de su origen coloquial, ha venido a tener una definición técnica en acuerdos sobre el comercio global (véase arriba). Como en los primeros discursos de la economía moral, el Estado es visto de manera ambivalente; aquí, como un proveedor benevolente de subsidios directos e indirectos, pero también como un antagonista y promotor de un modelo destructivo de producción y comercio. El objetivo de reorientar la agricultura hacia el mercado interno requeriría fortalecer el Estado —el cual antes era uno de los principales adversarios de los campesinos— como una defensa contra las fuerzas supranacionales. Las multinacionales, desde el punto de vista de Alegría, ejemplifican al actor económico cuyo peso es tan grande que de manera injusta se apropia recursos que deberían ser para los pequeños productores. El mercado local regulado figura como un espacio en peligro de extinción, y el único en el cual los campesinos tienen una oportunidad real de lograr un nivel de vida aceptable. Más significativo, sin embargo, para Vía Campesina, es que una postura antisubsidio, en particular la que se opone a pagos por regular la oferta de productos o por servicios ambientales, contradeciría la reivindicación por "soberanía alimentaria".[29]

La "soberanía alimentaria" se planteó primero como una demanda de Vía Campesina a mediados de los noventa, en la Conferencia de Seguridad Alimentaria de la FAO en Roma, en 1996. El concepto recibió después una mayor elaboración teórica en una conferencia internacional en La Habana en 2001, a la que acudieron docenas de organizaciones miembro de Vía Campesina y de RAPM (Réseau Agricultures Paysannes et Modernisation, una red que incluye muchas organizaciones europeas y africanas) y en reuniones en 2002 y 2003 patrocinadas por el Gobierno regional de Toscana (Italia) y la Comisión Internacional sobre el Futuro de los Alimentos

29 Rosset (2003: 3) provee un resumen de lo que es acaso el punto de vista mayoritario dentro de Vía Campesina:
"Los subsidios *per se* no son el enemigo. Sus méritos dependen de cuánto cuestan los subsidios, quiénes los reciben y para qué son. Así, subsidios pagados solamente a grandes corporaciones en el Norte, conducentes a *dumping* y a la destrucción de hogares rurales en el Tercer Mundo, son malos. Pero los subsidios pagados a familias de agricultores para mantenerlos apegados a la tierra y sostener economías rurales vibrantes, los subsidios que ayudan con la conservación de suelos, la transición para prácticas de agricultura sustentable, y el mercadeo directo para consumidores locales, son buenos. El enemigo real de los agricultores son los bajos precios".

y la Agricultura (ICFFA, 2003), y en otras nuevas redes de trabajo de la sociedad civil y ONG, tales como el International Planning Committee for Food Sovereignty (Comité de Planeamiento Internacional para la Soberanía Alimentaria). La definición de la FAO de "seguridad alimentaria" se refiere a una situación —sea mundial, nacional o doméstica— en la cual toda persona en cualquier momento tiene acceso físico y económico a alimentación nutritiva adecuada. Mientras los oficiales de la FAO hablan de "seguridad alimentaria" como un "derecho", los activistas de Vía Campesina mantienen que los balances técnicos basados en suministros y bocas para alimentar deberían ser reemplazados con un compromiso con la "soberanía alimentaria". La "soberanía alimentaria", un concepto más amplio que considera el alimento ante todo un derecho humano más que una mercancía, prioriza la producción local y el acceso de los campesinos a la tierra, y defiende el derecho de las naciones a proteger sus productores del *dumping* y aplicar políticas de manejo de la oferta de productos agropecuarios. Por un lado, de acuerdo con Peter Rosset, del Institute for Food and Development Policy (Instituto para la Alimentación y la Política para el Desarrollo), el cual trabaja estrechamente con Vía Campesina, "la seguridad alimentaria […] no dice nada acerca de dónde […] vienen los alimentos o cómo estos son producidos" (Rosset, 2003). Por otro lado, "la soberanía alimentaria no anula el mercado, sino más bien […] promueve la formulación de políticas de comercio y prácticas que fortalecen los derechos de los pueblos para una producción segura, saludable y ecológicamente sustentable" (Vía Campesina, 2001: 2).

Los campesinos y agricultores activistas han presionado por "soberanía alimentaria" en organizaciones internacionales, en particular la FAO, que desde 1996 los invita regularmente a sus conferencias. Ellos también han llevado a cabo numerosos eventos teatrales y carnavalescos que construyen sobre duraderas tradiciones campesinas y prácticas de movimientos sociales actuales de protesta, entre ellos el famoso "desmantelamiento" que realizaron José Bové y sus vecinos de un restaurante de McDonald's en el sur de Francia, los ataques de campesinos de la India en las oficinas de Bangalore de la multinacional Cargill, las acciones de los sin tierra brasileños del MST, quienes arrancaron y destruyeron cultivos genéticamente modificados, y

la intervención de activistas vascos, franceses, brasileños y hondureños en manifestaciones de apoyo a los agricultores de oliva palestinos (Edelman, 2003). En julio de 2004, por ejemplo, un "Tribunal Internacional por la Soberanía Alimentaria" sesionó en Quito, Ecuador, con la participación del ganador del Premio Nobel de la Paz Adolfo Esquivel y un panel de distinguidos juristas y líderes de organizaciones indígenas y campesinas de toda América. El tribunal, que atrajo la atención de los medios en Sudamérica, pone al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo "en juicio" por políticas que han conducido a

> … el saqueo de los recursos naturales por medio del engaño y la presión a los Gobiernos para que privaticen sus empresas y recursos nacionales; acreditación de préstamos inconsultos a la población de dichos países; fracaso de los planes y proyectos aplicados en América Latina; pervertir el proceso de reforma agraria convirtiéndolo en un proceso de enriquecimiento de los latifundistas y desmembramiento de las comunidades campesinas (Váscomes, 2004).

En septiembre de 2004, una "caravana del pueblo para la seguridad alimentaria", organizada por la Pesticide Action Network, comenzó en Malasia y durante treinta días serpenteó su camino por otros doce países asiáticos, para culminar en Nepal, donde guerrilleros maoístas capturaron brevemente a veinte participantes y quemaron sus vehículos (Loone, 2004). La caravana sostuvo foros, llevó a cabo acciones de protesta conjuntas con diversas organizaciones campesinas locales y nacionales, visitó "fincas ecológicas" y proyectos de agricultura sustentable, y de nuevo atrajo grandes multitudes y logró una amplia difusión de sus planteamientos en los medios de comunicación. Entre los participantes estaba Percy Schmeiser, un agricultor de la provincia de Saskatchewan, quien luchó contra la Corporación Monsanto en las cortes canadienses después de que su finca orgánica fuera contaminada con canola genéticamente modificada sembrada en propiedades vecinas. Agricultores filipinos, quienes reclamaban haber sufrido males gastrointestinales, alergias en la piel y otros síntomas después que sembraron maíz Bt de Monsanto, se unieron a Schmeiser en un foro y desplegaron una pancarta que decía: "David versus Goliat: agricultores se enfrentan a Monsanto" (People's Caravan for Food Sovereignty,

2004).[30] Unas dos decenas de miembros de la caravana se separaron del grupo principal y recorrieron Francia, Bélgica y Alemania —apoyados por la organización alemana Food First Information Action Network (FIAN) y la organización projusticia global francesa ATTAC—,[31] donde ellos participaron en mesas redondas con agrónomos, agricultores y activistas de alimentos (Wolff, 2004). La declaración final de la caravana resaltó las aspiraciones económicas morales que había detrás de esta multifacética manifestación transnacional:

> La soberanía alimentaria es el derecho inalienable de los pueblos, comunidades y países para definir, decidir y desarrollar sus propias políticas agrícolas, laborales y de pesca, alimentos y tierra que son apropiadas ecológica, social, económica y culturalmente para sus circunstancias particulares. Esto incluye el derecho verdadero a la alimentación y a producir alimentos, lo que significa que todo pueblo tiene el derecho a alimentación segura, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos y tecnologías necesarias para producir alimentos, y la capacidad de sostenerse ellos mismos y conservar sus recursos naturales y sus sociedades. La Caravana de los Pueblos está llamando por una Convención Internacional sobre Soberanía Alimentaria con el fin de enaltecer los principios de la soberanía alimentaria en la ley internacional e instituir la soberanía alimentaria como el principal marco de política para tratar alimentos y agricultura (People's Caravan for Food Sovereignty, 2004).

30 El maíz Bt genéticamente modificado por la Corporación Monsanto (el cual tiene el nombre comercial de Yieldgard) produce proteínas insecticidas de una bacteria del suelo (*Bacillus thuringiensis*) que resiste infestaciones del barrenador del maíz. Activistas han atacado a Monsanto y a otras compañías de biotecnología de semillas por contribuir a la contaminación genética de variedades nativas y otras variedades de cultivos, reduciendo poblaciones de insectos polinizadores, amenazando la salud de humanos y animales, y demandando de los agricultores la adquisición de licencias que los obligan a no guardar semillas para futuros ciclos de siembra.

31 ATTAC tiene seccionales en muchos países que trabajan sobre temas de justicia y desarrollo. Ha impulsado una campaña por el impuesto Tobin (una propuesta del economista y premio nobel James Tobin), que consistiría en un gravamen pequeño sobre todos los movimientos internacionales de cambio de divisas, con el objetivo de disminuir la velocidad del capital especulativo. Su dificultoso nombre completo es Association pour une Taxation des Transactions Financiéres pour l'Aide aux Citoyens (Asociación por Impuestos de las Transacciones Financieras para la Ayuda de los Ciudadanos). La sección europea de la caravana fue solamente la más reciente de diversas caravanas de organizaciones campesinas asiáticas por Europa (véase Edelman, 2003: 203, 212).

En conversaciones con activistas campesinos y agricultores en América Latina, Norteamérica y Europa, a menudo les he preguntado acerca de la factibilidad de la soberanía alimentaria y de sacar a la OMC de la agricultura. Definir cómo un kilo de trigo puede ser producido bajo diferentes reglas para exportación o para consumo doméstico, o cuando un producto agrícola deja de ser agrícola y se convierte en un producto industrial sujeto a normas de la OMC, son solo dos de los numerosos temas espinosos que tendrían que resolverse. Las respuestas de los activistas, sin embargo, no se enfocan sobre tales complicaciones, sino, más que eso, sobre dos temas principales: (1) Que las condiciones fueran mejores antes de la fundación de la OMC y (2) que las reglas de la OMC fueran profundamente hipócritas y en especial más para los agricultores de países en vías de desarrollo. Karen Pedersen, una joven apicultora de Saskatchewan y activista de la Canadian National Farmers Union, acudió al encuentro de la FAO "Roma+5" 2001 sobre seguridad alimentaria como parte de una delegación de Vía Campesina. "¿Qué tan práctico es mantener la agricultura en la OMC?", ella pregunta, retomando las discusiones en la conferencia de Roma.

> En algún momento tenemos que parar y mirar a nuestro sistema rural de la manera que esto es y decir, "¿Sabes qué? Esto no está funcionando. […] esto no está distribuyendo alimentos. Esto está produciendo cada vez más alimentos, esto está exportando cada vez más alimentos, pero esto no los está distribuyendo. No estamos ganando en un mundo hambriento". ¿Y si dejamos la agricultura allí en la OMC? Quiero decir, lo que vamos a tener es que vamos a perder todos nuestros pequeños agricultores, y cuando el sistema colapse no vamos a tener ninguna capacidad para reconstruir el sistema […] La agricultura es la industria de alimentos. Y yo no estoy convencida de que usted debería estar embarcando, por ejemplo, cerdos alrededor del mundo. Ese no es solo el problema. Embarcar tocino es también un problema.
>
> ¿Es la producción de tocino considerada una industria? Sí lo es. Pero ¿necesita ser removida de la OMC también? Sí, también. Así que, para mí no es suficiente solo sacar el producto crudo de la OMC. Eso no es solo la agricultura. La agricultura es…, usted sabe, nos gusta llamar a esto

> agroindustria o agronegocios, pero solemos llamarlo agricultura, y eso es lo que es. Solo hemos cambiado la terminología (Pedersen, entrevista con el autor, 20 de noviembre de 2002).

Los comentarios de Pedersen, como los de Alegría, invocan normas morales contra las reglas y las estructuras burocráticas que gobiernan los mercados globales: "distribución" en vez de producción; "eliminación del hambre" más que exportar; y la identificación de "agricultura" con alimento, sustento y sitios locales. Los pequeños agricultores, ella afirma, tienen la experiencia de la que carecen los grandes operadores industriales, y ellos son más respetuosos de la tierra. Finalmente, el lenguaje en sí mismo —la definición de agricultura— ha de ser reafirmada para ganar terreno en la lucha con las grandes corporaciones agroindustriales y las instituciones de gobernabilidad supranacional, tales como la OMC.

Los activistas han ofrecido varias propuestas para marcos institucionales alternativos para la administración del comercio agrícola global. Vía Campesina ha señalado al Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de 1996, el cual establece el derecho humano a la alimentación, y lo ha interpretado como un reconocimiento a los derechos de las comunidades campesinas para conservar el acceso a recursos productivos (Verhagen, 2004: 16).[32] Algunas organizaciones de Vía Campesina esperan que la FAO o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) puedan asumir algunas funciones regulatorias en el comercio agrícola. El activista agricultor francés José Bové, un colaborador de Vía Campesina, ha apelado por un

32 El artículo 11 compromete a los firmantes de la Convención a "reconocer el derecho de cada uno a un adecuado nivel de vida para él mismo y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda, y el continuo mejoramiento de las condiciones de vida". También llama por el "reconocimiento del derecho fundamental de cada uno para estar libre del hambre", y por programas "para mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos para hacer uso completo del conocimiento científico y técnico, para diseminar conocimiento de los principios de la nutrición y para desarrollar o reformar sistemas agrarios de tal modo que logre el más eficiente desarrollo y utilización de los recursos naturales". Finalmente, hace un llamado por "tomar en cuenta tanto los problemas de países que importan como de los que exportan alimentos, para asegurar una distribución equitativa de los suministros de alimento en el mundo en relación con la necesidad" (Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 1976).

Tribunal de Comercio Internacional modelado en la Corte Internacional de los Derechos Humanos (Bové, 2001: 95-96). Al fondo de estas discusiones, las cuales tratan aspectos arcanos de las burocracias de gobernabilidad supranacionales, hay un discurso muy antiguo y fundamental acerca de derechos: sea el reconocimiento del ICESCR de un derecho humano para el alimento o la demanda más generalizada por "precios justos" no afectados por las prácticas comerciales no éticas de los ricos y poderosos. Aquí hay ecos de las primeras luchas y demandas campesinas, como aquellas descritas por Scott en *The moral economy of the peasant*, pero impregnadas por el conocimiento especializado que generan los movimientos sociales trasnacionales contemporáneos (Keck y Sikkink, 1998: 30).

Los proyectos de "soberanía alimentaria" y de sacar a la OMC de la agricultura podrían o no ser quijotescos u utópicos. Ellos pueden incluso sugerir el atavismo que las elites casi siempre han considerado típico de los movimientos agrarios. Pero el discurso de "derechos" y justicia, de una "subsistencia confiable" y de una "economía moral" reinstalada en la sociedad —aunque sea una sociedad global— son claramente sus pilares centrales.

Conclusión

Las continuidades organizacionales e históricas y los vínculos entre el activismo campesino político local, nacional, regional y transnacional —así como también las experiencias políticas de los activistas transnacionales, los cuales a menudo trabajan al mismo tiempo en estos ámbitos variados— nos permiten apreciar la continuidad de las reivindicaciones económicas morales en las luchas campesinas. La conexión entre la caída de precios pagados al productor y las políticas de comercio y subsidios que fomentan el *dumping*, por ejemplo, es ahora ampliamente comprendida entre campesinos y agricultores de las más diversas circunstancias en los lugares más variados. En el curso de la vida de un solo activista, la lucha podría haberse desplazado desde la búsqueda de justicia de las elites locales a la defensa de un banco de desarrollo del sector público contra la privatización y luego a un esfuerzo para detener una ronda de negociaciones de la OMC. Los viejos discursos económicos morales acer-

ca de precios justos, acceso a la tierra, mercados injustos y la codicia de los poderosos han hecho eco en las luchas de hoy contra la liberalización de comercio global, la reforma agraria basada en el mercado auspiciada por el Banco Mundial y los intentos de las grandes trasnacionales para ganar un mayor control de los mercados de alimentos y de la propiedad del germoplasma vegetal. El Estado y el mercado —los antagonistas de antaño— aún amenazan los modos de vivir campesinos hoy, junto con las nuevas formas supraestatales de gobernabilidad. Justo como Scott lo describió para el primero, así también para el último, "las fuerzas [que] cortan a través del tejido de las costumbres de subsistencia y las relaciones sociales tradicionales para reemplazarlas por contratos, el mercado y leyes uniformes" (1976: 189).

El aumento del activismo campesino trasnacional se apoya en sensibilidades económicas morales profundamente arraigadas, así como en viejos discursos agrarios y repertorios de protesta. Para los activistas, sin embargo, las presiones de mercados globalizados y las demandas de acción colectiva trasnacional han requerido nuevos grados de sofisticación política, nuevas alianzas y una capacidad de desplazarse a través de espacios geográficos e institucionales diferentes. Estos saltos en el espacio de las políticas podrían ocurrir en el curso de una vida, pero a veces suceden en el curso de una sola semana. Ello refleja tanto la densidad de las redes de trabajo transfronterizas como el carácter cada vez más complejo y global de la agricultura misma. Afirmando las reivindicaciones económicas morales en nuevos espacios políticos, ha proporcionado a los participantes en las redes trasnacionales de campesinos y agricultores un sentido dinámico sin precedentes de ellos mismos como actores políticos. Potenciados con nuevos conocimientos, concepciones de solidaridad y herramientas de lucha, ellos hablan de los principios económicos morales con orgullo y pasión; sin embargo, en muchos otros aspectos, son tan disímiles de los rústicos, poco sofisticados campesinos que todavía figuran en el imaginario de las elites urbanas y académicas.

Agradecimientos

Agradezco mucho los comentarios constructivos sobre las primeras versiones de este artículo que recibí de Jefferson Boyer, Linda Grasso, Angelique Haugerud y Jane Schneider. También estoy agradecido por el apoyo para el trabajo de campo de la National Science Foundation de los EE. UU. (asignaciones #SBR-9319905 y #SBR 0107491), el PSC-CUNY Research Awards Program (#668480 y #63529 00 32) y la American Philosophical Society.

Referencias

Aguirre Rojas, C. A. 1999. *La escuela de los Annales: ayer, hoy, mañana*. Montesinos.

Bernstein, H. y T. J. Byres. 2001. From peasant studies to agrarian change. *Journal of Agrarian Change*, *1*(1), 1-56.

Booth, W. J. 1994. On the idea of the moral economy. *American Political Science Review*, *88*(3), 653-667.

Borras, S. M. 2004. *La Vía Campesina: an evolving transnational social movement*. TNI Briefing. Series [Transnational Institute, Amsterdam], núm. 6, 32. http://www.tni.org/reports/newpol/campesina.pdf

Bové, J. 2001. A farmers' International? *New Left Review*, *12*, 89-101.

Buijtenjuijs, R. 2000. Peasant wars in Africa: gone with the wind? En Deborah Bryceson, Cristóbal Kay e Jos Mooij (eds.). *Disappearing peasantries? Rural labour in Africa, Asia and Latin America* (pp. 112-122). Technology Publications.

Chayanov, A. V. 1966. *The theory of peasant Economy*. Ed. por Daniel Thorner, Basile Kerblay y R.E.F. Smith. University of Wisconsin Press. (Publicación original, 1925).

Coordination Paysanne Européenne (CPE). 2004. At the WTO, Rischler and Lamy betrayed the European farmers and those from the southern countries, to the only advantage of the transnational.

Comunicado de prensa, 3 de agosto, Bruselas. agri-trade@yahoogroups.com, publicado por Alexandra Strickner, 5 de agosto.

Desmarais, A.-A. 2002. The Vía Campesina: consolidating an international peasant and farm movement. *Journal of Peasant Studies*, *29*(2), 91-124.

Desmarais, A.-A. 2003. *The Vía Campesina: peasants resisting globalization* [Tesis de doctorado, Department of Geography, University of Calgary].

Edelman, M. 1998. Transnational peasant politics in Central America. *Latin American Research Review*, *33*(3), 49-86.

Edelman, M. 1999. *Peasants against globalization: rural social movements in Costa Rica*. Stanford University Press.

Edelman, M. 2002. Toward an anthropology of some new internationalisms: small farmers in global resistance movements. *Focal-European Journal of Anthropology*, *40*, 103-122.

Edelman, M. 2003. Transnational peasant and farmer movements and networks. En M. Kaldor, H. Anheier y M. Glasius (eds.). *Global civil society 2003* (185-220). Oxford University Press. http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Yearbook/outline2003.htm

Eikeland, S. 1999. New rural pluriactivity? Household strategies and rural renewal in Norway. *Sociologia Ruralis*, *39*(3), 359-376.

Florescano, E. 1969. *Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810): ensayo sobre el movimiento de los precios y sus consecuencias económicas y sociales.* El Colegio de México.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2000. Trends in world and agricultural trade. En *Multilateral trade negotiations on agriculture: a resource manual*. FAO. http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/003/x7352e/x7352e01.htm

Galeano, E. 1998. *Patas arriba: la escuela del mundo al revés.* Siglo XXI.

Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science*, *162*(3859), 1243-1248.

Haugerud, A. 1995. *The culture of politics in modern Kenya.* Cambridge University Press.

Helleiner, E. 1994. From Bretton Woods to global finance: a world turned upside down. En R. Stubbs y G. R. D. Underhill (eds.). *Political economy and the changing global order* (163-175). St. Martin's Press.

Hewitt de Alcántara, C. 1984. *Anthropological perspectives on rural Mexico.* Routledge and Kegan Paul.

International Commission on the Future of Food and Agriculture (ICFFA). 2003. *Manifesto on the Future of Food.* San Rossore, Italia: ICFFA. http://www.slowfood.com/eng/sf_cose/campagne/manifesto%20inglese.pdf

Keck, M. E. y K. Sikkink. 1998. *Activists beyond borders: advocacy networks in international politics.* Cornell University Press.

Labrousse, E. 1962. *Fluctuaciones económicas e historia social.* Tecnos.

Le Roy Ladurie, E. 1996. *The ancien régime: a history of France, 1610-1774.* Blackwell.

Llambí, L. 2000. Global–local links in Latin America's new ruralities. En D. Bryceson, C. Kay y J. Mooij (eds.). *Disappearing peasantries? Rural labour in Africa, Asia and Latin America* (176-212). Intermediate Technology Publications.

Loone, S. 2004. People's caravan participants captured by Nepali maoists and burn two of their vehicles. En *People's Caravan 2004 for Food Sovereignty.* 29 de september de 2004. Comunicado de prensa, 6. Distribuido por Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific a agri-trade@yahoogroups.com

Marsden, T. 1995. Beyond agriculture? Regulating the new rural spaces. *Journal of Rural Studies*, *11*(3), 285-296.

Migdal, J. S. 1974. *Peasants, politics, and revolution: pressures toward political and social change in the third world.* Princeton University Press.

Moore, B., Jr. 1966. *Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world.* Beacon Press.

Moreno Fraginals, M. 1985. Plantations in the Caribbean: Cuba, Puerto Rico, and the Dominican Republic in the late nineteenth century. En M. Moreno Fraginals, F. Moya Pons y S. L. Engerman (eds.). *Between slavery and free labor: the Spanish-speaking Caribbean in the nineteenth century* (3-21). Johns Hopkins University Press.

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 1976. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.* http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

Olson, M., Jr. 1965. *The logic of collective action: public goods and the theory of groups.* Harvard Economic Studies, vol. CXXIV. Harvard University Press.

Orlove, B. S. 1997. Meat and strength: the moral economy of a Chilean food riot. *Cultural Anthropology, 12*(2), 234-268.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action.* Cambridge University Press.

People's Caravan for Food Sovereignty. 2004. Statement of the People's Caravan for Food Sovereignty 2004: assert our rights to land and food! En *People's Caravan 2004 for Food Sovereignty.* 30 de septiembre de 2004. Comunicado de prensa, Kathmandu, Nepal, 6 pp. Distribuido por Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific a agri-trade@yahoogroups.com

Perelman, M. 2000. *The invention of capitalism: classical political economy and the secret history of primitive accumulation.* Duke University Press.

Polanyi, K. 1957. *The great transformation: the political and economic origins of our time.* Beacon Press. (Publicación original, 1944).

Popkin, S. L. 1979. *The rational peasant: the political economy of rural society in Vietnam.* University of California Press.

Roseberry, W. 1993. Beyond the agrarian question in Latin America. En F. Cooper, A. F. Isaacman, F. E. Mallon, W. Roseberry y S. J. Stern (eds.). *Confronting historical paradigms: peasants, labor, and the capitalist world system in Africa and Latin America* (318-368). University of Wisconsin Press.

Roseberry, W. 1995. Latin American peasant studies in a "postcolonial" era. *Journal of Latin American Anthropology*, *1*(1), 150-177.

Rosset, P. 2003. Food sovereignty: global rallying cry of farmer movements. *Food First Backgrounder*, *9*(4), 1-4. http://www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/2003/f03v9n4.html

Sahlins, M. 1972. *Stone Age economics.* Aldine-Atherton.

Salemink, O. 2003. Social science intervention: moral versus political economy and the Vietnam war. En P. Quarles van Ufford y A. K. Giri (eds.). *A moral critique of development: in search of global responsibilities* (169-193). Routledge.

Scott, J. C. 1976. *The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.

Scott, J. C. 1985. *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance.* Yale University Press.

Scott, J. C. 1990. *Domination and the arts of resistance: hidden transcripts.* Yale University Press.

Shanin, T. 1972. *The awkward class: political sociology of peasantry in a developing society. Russia, 1910-1925.* Clarendon Press.

Simpson, A. *et al*. 2004. Letter from Alan Simpson, MP, 69 Other Parliamentarians, 47 Organizations, and Seven Individuals to Ambassador Tim Groser, Chairperson, WTO Committee on Agriculture, Ginebra, 14 de julio. Distribuido por Aksel Naerstad to agri-trade@yahoogroups.com

Sivaramakrishnan, K. 2004. Introduction to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence'. *American Anthropologist*, *107*(3), 321-330.

Stiglitz, J. E. 2001. Forward. En K. Polanyi (ed.). *The great transformation: the political and economic origins of our time* (VII-XVII). Beacon Press.

Thompson, E. P. 1966. *The making of the English working class.* Vintage.

Thompson, E. P. 1971. The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past and Present*, *50*, 76-136.

Thompson, E. P. 1991. *Customs in common.* New Press.

Tilly, C. 2001. Do unto others. En M. Giugni y F. Passy (ed.). *Political altruism? Solidarity movements in international perspective* (27-47). Rowman and Littlefield.

Van Rooy, A. 2004. *The global legitimacy game: civil society, globalization and protest.* Palgrave.

Váscomes, W. 2004. Tribunal por la Soberanía Alimentaria: juicio al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por su deuda social y ecológica en la agricultura con los pueblos y países de América Latina. Comunicado de prensa, Quito, 27 de julio. Distribuido por Jóvenes Tejiendo un Nuevo País a info-jtnp@lists.riseup.net

Verhagen, N. 2004. Commentary on land and rural development policies of the World Bank. *Vía Campesina*. 17. http://www.viacampesina.org/IMG/_article_PDF/article_317.pdf

Vía Campesina. 2001. *Priority to peoples' food sovereignty (November 1).* 10 pp. http://www.viacampesina.org/IMG/_article_PDF/article_34.pdf

Warman, A. 1976. *(...) Y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el Estado nacional.* Ediciones de la Casa Chata.

Warman, A. 2001. *El campo mexicano en el siglo XX.* Fondo de Cultura Económica.

Wolf, E. R. 1957. Closed corporate communities in Meso-America and Java. *Southwestern Journal of Anthropology*, *13*, 1-18.

Wolf, E. R. 1966. *Peasants.* Prentice-Hall.

Wolf, E. R. 1969. *Peasant wars of the twentieth century.* Harper and Row.

Wolf, E. R. 1986. The vicissitudes of the closed corporate peasant community. *American Ethnologist*, *13*(2), 325-329.

Wolff, K. 2004. Huge solidarity for the People's Caravan in France. En *People's Caravan 2004 for Food Sovereignty.* 20 de septiembre de 2004, 7. Comunicado de prensa. Distribuido por Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific a agri-trade@yahoogroups.com

World Bank. 2005. *Global agricultural trade and developing countries.* Ed. de M. Ataman Aksoy y John C. Berghin. World Bank. http://siteresources.worldbank.org/INTGAT/Resources/GATfulltext.pdf

Zoomers, A. y G. van der Haar (eds.). 2000. *Current land policy in Latin America: regulating land tenure under neo-liberalism.* Royal Tropical Institute / KIT Publishers.

9. Algunas genealogías intelectuales para el concepto de resistencia cotidiana[1]

K. Sivaramakrishnan

Resumen: La preocupación por cómo los factores culturales influyeron en el cambio social agrario fue un interés permanente en la obra de James Scott. Comienzo esbozando el contexto de los debates en la teoría marxista, los estudios sobre el desarrollo y la antropología social y política que, durante la década de 1980, se centraron en las relaciones entre ideas, poder y procesos de cambio y conflicto en un mundo de nuevas naciones poscoloniales y rápido desarrollo agrario. En el artículo examino detenidamente las ideas que desarrolló Scott sobre la resistencia y la hegemonía en conversación con la obra de E. P. Thompson. Rastreando la genealogía de las ideas de Scott sobre la hegemonía y la protesta social rural, comento con cierto detalle la literatura sobre resistencia que surgió en la antropología durante la década de 1980 y el papel de *Weapons of the weak* (1985), de Scott, en la configuración de esa literatura, al tiempo que interactúo con *Subaltern studies* (Guha, 1982-87), los estudios de los movimientos sociales y los exámenes del poder en las relaciones interpersonales.

Palabras clave: hegemonía, resistencia, poder, movimientos campesinos, crítica del desarrollo.

Derivado de la amplitud y diversidad de debates y estudios inspirados en la urgencia de emular o criticar las aportaciones de James Scott, en este artículo evito dos tentaciones y, así, espero eludir la inevitable derrota de los esfuerzos por ser exhaustivo en su tratamiento. En primer lugar, no resumiré los argumentos de cada uno de los cuatros libros principales de James Scott tratados en la introducción editorial. En segundo lugar, no

1 Publicado originalmente en: K. Sivaramakrishnan, 2005, "Some intellectual genealogies for the concept of everyday resistance", *American Anthropologist*, 107(3): 346-355.

revisaré toda la obra que se ha escrito en diálogo crítico con ellos. Más bien, intentaré trazar un recorrido a través de la escritura de Scott que considere algunas de las ideas clave consideradas vigas y pilares centrales en la arquitectura de la obra de Scott, abarcando desde la economía moral hasta el poder y la resistencia, pasando por sus críticas al alto modernismo y al funcionamiento de los Estados modernos en todo el mundo. A medida que la elucidación del poder, la hegemonía y la resistencia se constituyen como los principales pilares conceptuales, dirigiré mi atención a ese conjunto de conceptos, centrándome en cómo se abordan en *Weapons of the weak* (1985) y en algunos ensayos seminales.

Mi elección de énfasis se debe, en parte, al informe de Joan Vincent de que los antropólogos en las décadas de los setenta y ochenta estaban muy interesados en el hecho de que la devastación, en las zonas rurales más remotas que visitaban habitualmente, era causada por el capitalismo global. También les desconcertaba aquello que parecía ser un fracaso de la movilización de clase en estas comunidades.[2] Vincent señala además que, para investigar este enigma, los antropólogos se basaron en la obra de E. P. Thompson y Scott (Vincent, 1990).[3] Además de prestar atención a lo que la historia definitiva de la antropología política denota como importante, mi enfoque aportará cierta coherencia a lo que es, sin duda, un tratamiento selectivo. Por último, al centrarme más en *Weapons of the weak* (1985), espero sentar las bases para los demás artículos de este enfoque, los cuales ofrecen un diálogo más sostenido con *The moral economy of the peasant* (1976), *Domination and the arts of resistance* (1990) o *Seeing like a state* (1988).

2 Véase Vincent (1990: 400-405), para un tratamiento conciso de la política desde abajo y la importancia de las ideas sobre la economía moral en la sociedad campesina para la academia agraria en el último cuarto del siglo XX.

3 Casi tan pronto como Scott ayudó a centrar la atención de los antropólogos en la difícil situación de los campesinos, su trabajo suscitó cuestionamientos, sobre todo por parte de estudiosas feministas, que ayudaron a construir historias alternativas no solo de los campesinos y sus luchas, sino de la propia creación de la categoría "campesino". Estos estudios revisionistas relatan cómo se forjó el campesinado como identidad y cómo los hogares campesinos fueron reconocidos y encarnados en el discurso académico y de desarrollo. Para una excelente revisión y análisis original de estas tendencias, véase Tsing (2003).

Entre 1977 y 1989, tras la publicación de *The moral economy of the peasant* (1976) y antes de la publicación de *Domination and the arts of resistance* (1990), creció la literatura antropológica sobre el desarrollo agrícola y el cambio social en Asia, África y América Latina poscolonial.[4] Esta progresión fue paralela a la de la literatura emergente sobre los estudios del desarrollo influidos por el marxismo y, de manera más amplia, por la historia económica, que se ocupaba de la transición al capitalismo de las relaciones sociales agrarias.[5] Al principio, los estudiosos de estas transiciones eran historiadores económicos que trabajaban en la Europa industrializada, pero pronto se unieron al debate otros economistas y antropólogos interesados en la economía política del desarrollo.[6]

Podemos considerar la ramificación de las ideas de Scott y el giro general hacia las dimensiones culturales de los conflictos sociales rurales de dos maneras complementarias para los investigadores del cambio social agrario. Una forma es recordar que Scott admiraba la obra de Eric Hobsbawm y Raymond Williams. Así, es significativo que veamos, a principios de la década de los ochenta, a los marxistas de la nueva izquierda reunirse alrededor de la obra de Hobsbawm para reflexionar sobre la relación entre ideología y política en contextos de cambio social rural. Del mismo modo, Williams, mediante una serie de ensayos y libros influyentes, ubicó la formación de la hegemonía cultural y su papel en el cambio social en el

4 Algunos ejemplos notables de obras clave que aportaron a una perspectiva antropológica influida por el marxismo sobre las relaciones de clase agrarias serían Berry (1985), Gough (1981), Kahn (1980), Roseberry (1983) y Watts (1983). A principios de la década de los setenta se había llevado a cabo en el St. John's College, de la Universidad de Oxford, un estudio muy leído sobre las relaciones entre el marxismo y la antropología social, que se publicó con el título *Marxist analyses and social anthropology* (Bloch, 1975). Muchos antropólogos encontraron un lugar para este tipo de obra en las páginas de *Peasant Studies*, una revista que empezó a publicarse en Estados Unidos en 1976, y en la revista *Journal of Peasant Studies*, publicada por primera vez en 1973 en Inglaterra.

5 La mejor revisión de los debates sobre la transición sigue siendo la de Aston y Philpin (1987). Véase también Hart *et al.* (1989) que, en algunos aspectos, llevaron el debate al sudeste asiático, en donde se interesaron por debatir la obra de Scott (1976; 1985). Una apreciación más amplia de la obra de Scott para el campo de antropología histórica puede encontrarse en Roseberry (1989: 55-79).

6 Edelman y Haugerud (2004) ofrecen un excelente repaso de la aparición de los estudios sobre el desarrollo y del papel desempeñado por la antropología, y por Scott, en la infusión de perspectivas culturales al estudio de las transiciones agrarias y las relaciones de clase.

centro del debate de la teoría marxista durante la década de los setenta. La segunda forma es considerar la obra de antropólogos sobre Europa que trajeron de vuelta el estudio sobre los aspectos culturales de dicho cambio, de los entornos poscoloniales a los contextos europeos, en donde los debates sobre la transición habían evitado el análisis cultural.[7]

Cultura, clase y hegemonía

Debo aclarar que la atención a las dimensiones culturales de las relaciones de clase en la obra de Scott se relaciona con un conjunto específico de intereses. Estos intereses no son similares a los de los antropólogos estructurales funcionalistas ni a los de los estructurales, quienes intentaban explicar la organización de las relaciones económicas en términos de una estructura social o un sistema de ideas, profundamente arraigadas, que conforman la cultura. Como señalo en la introducción, los pares antropológicos de Scott, en ese momento, eran la escuela de Manchester y un pequeño grupo de marxistas culturales. Sin embargo, a Scott le interesaba registrar la agencia y las ideologías de los pobres y de las clases bajas rurales, para mostrar cómo sus acciones políticas en contextos de rápido cambio agrario "limitaron los tipos de relaciones económicas y la intensidad de la explotación que las élites podían imponer" (Edelman y Haugerud, 2004: 38). Para ello desarrolló una nueva noción de hegemonía. Lo hizo dentro de un contexto intelectual en donde los posestructuralistas, los posmarxistas y los especialistas en estudios culturales se basaban en Gramsci para entender cómo se produce el consentimiento en la sociedad en ausencia de coerción y riguroso control. Poco después de completar y publicar *The moral economy of the peasant* (1976), Scott escribió su primer gran artículo sobre la hegemonía (1977).

7 Para la discusión de Hobsbawn, véase Samuel y Jones (1983). Hobsbawm (1981) y Hobsbawm y Rudé (1968) fueron en particular importantes para Scott. Algunos trabajos de Williams son muy relevantes aquí (1973a; 1973b y 1977). Para centrarse en los aspectos culturales en contextos de cambio agrario en Europa, véanse Blok (1972), Herzfeld (1985) y Holmes (1989), algunos ejemplos que relacionan la formación de la identidad rural con las transformaciones tanto rurales como urbanas.

En última instancia, Scott llega a una postura sobre la hegemonía que es paralela y se asemeja a las formulaciones influyentes que surgieron dentro de la antropología histórica durante la década de los ochenta. Por ejemplo, una de esas síntesis clave señala:

> Puesto que es posible, de hecho, inevitable, que algunos símbolos y significados no sean hegemónicos –e imposible que ninguna hegemonía reclame todos los signos del mundo para sí—, la cultura no puede subsumirse en la hegemonía, con independencia de cómo se conciban los términos. Puede que el significado nunca sea inocente, pero tampoco se reduce exclusivamente a las posturas del poder (Comaroff y Comaroff, 1991: 20).[8]

Una visión dominante de la hegemonía fue desarrollada por Pierre Bordieu (1977), más cercano a Raymond Williams en su lectura de la hegemonía a través de las formas culturales dominantes. Pero dentro y fuera de la antropología, en el campo más amplio de los estudios culturales, se estaba gestando una visión más inestable y controvertida de la hegemonía. Scott aporta una perspectiva única a este debate con su lectura distintiva y limitada de la noción de hegemonía "ideológica" o "cultural".[9]

De ahí que, en este artículo, mi diálogo fundamental con la obra de Scott comienza con un paréntesis en las ideas sobre el concepto de hegemonía. A continuación, examino la influencia de Thompson en Scott y el estudio de las formas cotidianas de resistencia. El último de estos temas se convirtió en una de las principales preocupaciones de los antropólogos desde mediados de la década de los ochenta hasta más de una década después. Scott era un gran admirador de Thompson, un historiador de la nueva izquierda, y podemos, por tanto, empezar apropiadamente con la conocida definición de Thompson de hegemonía —un concepto que Scott trata con amplitud tanto en *Weapons of the weak* (1985) como en *Domination and the arts of resistance* (1990)—. Thompson no comulgaba con la idea de que la

8 Otros antropólogos históricos importantes que también han abordado la cuestión de la hegemonía como insegura e inestable son Cohn y Dirks (1988).

9 Para debates sobre la hegemonía en los estudios culturales durante la década de los ochenta, véase Nelson y Grossberg (1988).

hegemonía implicara la aceptación, por parte de los pobres, del paternalismo de la aristocracia, de manera indiscutible. La deferencia de los pobres podía verse desde abajo como parte de una autopreservación necesaria y de una extracción calculada de lo que se pudiera obtener. Ambas partes de la ecuación estaban contenidas dentro de un campo de fuerza común (Thompson, 1971).[10]

Este planteamiento influyó de forma considerable en y fue reconocido por Scott (1985) en su análisis sobre los patrones de resistencia campesina y la naturaleza del cambio social en una aldea malaya sometida a la "Revolución Verde". Para Scott, el problema fundamental son las desigualdades y las relaciones de explotación que generan en la estructura social. Señala que "los tipos de resistencia y los tipos de conformidad que encontramos en Sedaka no pueden entenderse sin referencia al contexto más amplio de coerción real y anticipada" (1985: 244).[11] Esto sugiere un fuerte sentido de límites que inhiben ciertas formas de protesta y desafío en cuanto a lo pragmático. Scott, en su definición de cambio social, también señala límites, trazados experimentalmente, a la transformación social en acción e imaginación. Esta definición coincide con la idea del campo de fuerza de Thompson.[12]

El análisis de Scott de las formas cotidianas de resistencia —en contraposición a los llamativos estallidos de protesta revolucionaria y el rechazo de la categorización de dicha resistencia mediante criterios para evaluar su

10 Thompson explica su metáfora del campo de fuerza en otras fuentes (1991: 73), refiriéndose a un experimento escolar con un imán y limaduras de hierro. Como las limaduras agrupadas en dos polos, con unas pocas distribuidas en el centro, pero la mayoría orientada en una u otra dirección, Thompson encuentra a la alta burguesía y a la muchedumbre en extremos opuestos con grupos profesionales y comerciantes que alternan la dependencia de los gobernantes y la acción común con la multitud.

11 Al abordar el surgimiento histórico de la diferenciación y el modo en que el significado cultural se refracta a partir de las asimetrías de poder y estatus, Scott evita las críticas vertidas contra Geertz por Roseberry (1989) y Scholte (1986), respectivamente, sobre un historicismo y el olvido de las condiciones totalizadoras.

12 Véase el comentario de Scott, por ejemplo, de que "el punto principal es que los campesinos de Sedaka no reaccionan simplemente a las condiciones objetivas *per se*, sino más bien a la interpretación que hacen de estas condiciones como mediadas por valores arraigados en prácticas concretas" (Scott, 1985: 305). Esto le lleva a una definición de la resistencia que se basa a su vez en la necesidad material por interés propio, congruente con la naturaleza históricamente experimentada de la conciencia de clase. Esto deja a Scott de acuerdo con Thompson (1978).

relativo desinterés— se basa en su comprensión de las relaciones de clase. Sus ideas sobre la clase pueden resumirse como sigue: (a) La formación de clases está mediada por la experiencia humana y la interpretación de esa experiencia en determinadas relaciones productivas;[13] (b) la clase no agota el espacio explicativo total de la acción social porque "la desordenada realidad de identidades múltiples continuará siendo la experiencia a partir de la cual se conducen las relaciones sociales" (1985: 43) y (c) tal concepto de "clase" está incrustado en historias particulares de relaciones sociales, donde adquiere su poder y significado únicos.[14] Scott sostiene que gran parte de la política de los grupos subordinados entra en la categoría de formas cotidianas de resistencia. Afirma además que se trata sin duda de una forma de lucha de clases porque requiere un alto nivel de cooperación tácita entre las clases de resistidores. Por último, señala que las formas cotidianas de resistencia, al estar poco coordinadas, tienen que apoyarse en culturas populares de resistencia.[15]

Con esta teoría de la formación de clases influida culturalmente, pasemos al concepto de hegemonía ideológica y el descontento de Scott con ella. La teoría de la hegemonía se originó en la formulación hegeliana de la relación dialéctica entre la conciencia del amo y la conciencia del oprimido, siendo la primera independiente y la segunda dependiente (Hegel, 1977).

13 Citando los casos extremos de las imágenes del "rico avaricioso" y el "pobre holgazán" que caracterizaban el debate sobre las relaciones de clase en Sedaka, Scott escribe:
Haji Broom y Razak adquieren gran parte de su poder como símbolos en virtud de su realidad como ejemplos humanos concretos del comportamiento que han llegado a significar […] lo que uno decida hacer de estas leyendas vivientes —precisamente lo que significan— es otra cuestión, pero se originan en hechos sociales […] las historias que giran en torno a estos dos hombres también deben reconocerse como piedras angulares de un edificio ideológico en construcción […] tales historias pueden leerse como una especie de texto social sobre el tema de la decencia humana (1985: 23).

14 Esto sigue de cerca a Thompson (1978), para quien la clase surge cuando los hombres y las mujeres viven sus relaciones productivas, experimentan determinadas relaciones sociales dentro de los marcos de significado disponibles para ellos a lo largo de la historia y manejan estas experiencias en acciones políticas culturalmente informadas.

15 Véase Scott (1993: 2-7) para una de las exposiciones más sucintas de lo que él considera "resistencia cotidiana" y por qué es importante como lucha social de clase y como acontecimiento histórico-cultural en la vida de las sociedades agrarias.

Gramsci (1971) profundizó el concepto y desarrolló un corpus teórico que en esencia mantuvo la descripción del proceso hegemónico como algo que excluía alternativas para la estructura actual de poder y estatus.[16] Fue Williams (1977) quien amplió la noción para incluir todo un conjunto de prácticas y expectativas. Habló de la hegemonía como una constelación de significados y valores vividos que, cuando se expresan en formas de práctica social y política, aparecían como recíprocamente confirmadoras —con presiones y límites específicos y cambiantes—.

En su estudio de la sociedad inglesa del siglo XVIII, Thompson (1978) puso de relieve hasta qué punto estas presiones se ejercen desde abajo y el constante flujo en el que permanecen los discursos hegemónicos. Scott (1985) aborda esa hegemonía tal como se ha creado en la lucha previa y cómo dicha hegemonía se pone a prueba y se modifica constantemente (1985: n. 336). Su concepción de la hegemonía, en pocas palabras, es un rechazo global de la falsa conciencia y de los intentos por deducir la persuasión ideológica de los pobres a partir de los actos observados de cumplimiento rutinario.[17] Retomando este tema en *Domination and the arts of resistance* (1990), Scott afirma que la presencia de conflicto social en diversos periodos históricos de las civilizaciones agrarias e industriales demuestra la considerable hegemonía ideológica en la obra de los que él denomina sucesores de Gramsci.[18]

La resistencia rutinaria, pues, es el recurso. Su actuación es visible en intercambios como la deferencia restringida mostrada por los campesinos a sus terratenientes en el sendero del pueblo, en la asistencia superficial de los pobres a los banquetes ofrecidos por un influyente haji. Scott se interesa por la fuerza decreciente de ese llamamiento simbólico a la conciencia del campesino rico, en especial cuando se formula en lo que

16 Para un estudio útil de cómo Gramsci formuló el concepto de hegemonía y cómo lo desarrolló y aplicó más tarde en los estudios culturales y la antropología, véase Smith (2003).

17 Como dice Scott: "Hazmah no tiene dificultad en reconocer cuándo ha sido explotado o maltratado, su esfuerzo y su logro ha sido tragarse su ira para que no peligre su sustento" (1985: 279).

18 Un estudio de varios casos históricos lleva a Scott a declarar de manera rotunda que "el intento de convertir una endeble teoría de la naturalización en una robusta teoría de la hegemonía parece, en mi opinión, claramente injustificado".

él denomina nociones precapitalistas de "obligación moral". Explica la disminución de la eficacia de ese reproche realizado como resultado de la marginación del campesinado en la producción agrícola.[19] Este cambio emana de la transformación capitalista de las relaciones productivas en la agricultura. Una consecuencia es el debilitamiento de la interdependencia simbiótica entre las clases de la sociedad aldeana. Cuando la necesidad de "eufemizar el poder económico" por medios simbólicos disminuye para los ricos, la eficacia de estrategias similares también se reduce para los pobres.[20] Scott (1985) subraya la inestabilidad de su universo simbólico compartido cuando describe los distintos aspectos que los diversos grupos sociales de Sedaka eligen para afianzar sus reivindicaciones de legitimidad cultural para sus aspiraciones políticas. Como señala Marc Bloch (1961), el uso selectivo de la tradición es indicativo de desorden. Esto también lo confirma la descripción que hace Scott del entorno normativo como un entorno lleno de conflictos e interpretaciones divergentes (1985: 303).

Diadas y redes

A su manera, Scott (1985) ha contribuido a reforzar el argumento a favor de los enfoques a pequeña escala y cercanos al terreno de la investigación en ciencias sociales. En el proceso, se sitúa en la compañía mixta de revisionistas, teóricos críticos, posmodernistas e incluso sociólogos que, a mediados de la década de los ochenta, consideraban que los intentos de abstraer los grandes procesos de los grandes sistemas debían moderarse seriamente. Muchos estudiosos sostienen que debería prestarse más atención a las redes y otras interconexiones mutuas en las que las personas estaban enredadas, como individuos y como miembros de grupos sociales (Tilly, 1984). Es importante señalar que estas redes de conexión son

19 Véase el debate sobre la "comercialización" y la influencia erosiva sobre las instituciones de redistribución y solidaridad social (1985: 173), la consideración posterior de las limitaciones existenciales en la lucha ideológica (1985: 240) o la disminución del poder sancionador de la "guerra de palabras", a medida que los hogares pobres se volvían superfluos para el cultivo de arroz (1985: 284).

20 La constatación de que los lazos de obediencia y protección mantenían unidos a grupos dispares en una situación de autoridad fragmentada, como suele ocurrir en las sociedades feudales, está ampliamente documentada. Véase, por ejemplo, el relato clásico de Bloch (1961).

importantes para dos principales corrientes de pensamiento, y a menudo divergentes, en la antropología de las décadas de los setenta y ochenta. Una, caracterizada como una corriente más materialista e histórica, está representada por la obra de Eric Wolf.

La otra corriente de pensamiento, más bien interpretativa y simbólica, se benefició de las influyentes aportaciones de Clifford Geertz. Sabemos que Scott leyó a Geertz de cerca e interactuó ampliamente con él en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton mientras escribía *Weapons of the weak* (1985) y artículos afines. Geertz, desde luego, ha abogado por mantener el análisis de las formas simbólicas vinculado de modo estrecho a acontecimientos y ocasiones sociales concretos. Con este fin, Geertz ha llamado a la perspectiva del antropólogo una de conocimiento extendido de asuntos extremadamente pequeños. Ha ido más allá para abogar por un enfoque narrativo en la búsqueda interpretativa del etnógrafo, para mantener las conexiones entre la formulación teórica y la descripción detallada sin oscurecer las apelaciones a las ciencias oscuras (Geertz, 1973).

Scott siempre fue gran admirador de Wolf y a menudo utilizaba la valiosa monografía de Wolf, *Peasants* (1966) en las clases que impartía.[21] Pero es importante distinguir cómo su interés compartido por los orígenes de la revuelta campesina o la resistencia, y por las líneas de actuación que siguieron, se manifestó de forma muy diferente en el estudio de las relaciones de dominación y resistencia. Wolf, como sostiene Roseberry, siempre quiso situar "la constitución de sujetos antropológicos concretos en la confluencia de corrientes globales, regionales y locales de formación

21 Wolf (1966 y 1969), este último citado de manera amplia en *The moral economy of the peasant* (1976) al elaborar las definiciones de campesinado que se utilizan en el argumento, siguen siendo textos clave en los estudios campesinos y en el estudio de los disturbios agrarios a lo largo de la década de los noventa. Wolf (1969) incluyó un capítulo sobre Vietnam, la región de interés en *The moral economy of the peasant* (1976). Pero también es interesante observar que Wolf se esforzaba por situar a los campesinos en historias específicas de cada región, incluso cuando intentaba establecer comparaciones entre esas historias. Esto ha llevado a algunos de sus intérpretes a ver su obra en contradicción con las nociones de "economía moral", al servicio de las cuales Scott (1976) se basa en Wolf (1969). Como han señalado Scott (1976) y Schneider (1995), los campesinos de Wolf tenían aversión al riesgo y les gustaba la limitada autonomía que les proporciona el cultivo de subsistencia.

de Estados, construcción de imperios, expansión y contracción de mercados, migraciones, etc." (1995: 56).[22] Scott no está menos interesado en este proceso; sin embargo, en obras individuales como *The moral economy of the peasant* (1976) o *Weapons of the weak* (1985), elige un nivel de interacción en el qué centrarse y presenta los conflictos de clase que examina sobre todo en forma de binario dialéctico, un enfoque que se popularizó ampliamente en *Subaltern studies*.[23] Debería estar claro para cualquier lector familiarizado con Scott y *Subaltern studies* que él, Ranjit Guha y los primeros volúmenes de *Subaltern studies* (1982-87) se influyen unos a otros en la formulación de este modo de estudiar la resistencia campesina.[24]

En cierto contraste con un enfoque centrado en la relación diádica entre dominación y resistencia, Wolf sugirió que "el factor decisivo para hacer posible una rebelión campesina reside en la relación del campesinado con el campo del poder que lo rodea (1969: 290).[25] Wolf se basaba en una tradición académica que veía el campo social como un entramado de conexiones en forma de red que también revelaban asimetrías de poder conformadas a lo largo de

22 En este artículo, Roseberry aborda el proyecto histórico-cultural de Wolf como particularmente interesado en la intermediación de las relaciones globales y locales por parte de clases clave que se situaban entre los dos ámbitos del poder y la producción.

23 Ya he tratado en otro lugar el modo dualista de análisis y sus trampas en *Subaltern studies* (véase Sivaramakrishnan, 1995). Otros diálogos críticos con la obra de este importante colectivo y su trabajo durante las décadas de los ochenta y los noventa, un periodo en el que Scott también estuvo estrechamente involucrado a sus principales estudiosos, se incluyen en varios ensayos en Ludden (2001) y Chaturvedi (2000).

24 En su prólogo a la nueva edición de la obra clásica de Ranajit Guha sobre la insurgencia campesina (Guha, 1983), Scott profundiza en esta relación dialéctica entre la díada de dominación y resistencia. Observa que "en la lectura de Guha, la insurgencia y la dominación son las dos voces en una conversación contradictoria compuesta de gestos, violencia, negación de reivindicaciones simbólicas" (Scott, 1999: xiii). Si se lee con el escepticismo de Scott respecto a la hegemonía ideológica y, por tanto, con su creencia en la autonomía relativa de la conciencia campesina (subalterna), esta presentación marcadamente diádica genera dos importantes puntos de confluencia en los marcos teóricos de Scott y Guha.

25 No es que las redes de poder más amplias no estén presentes en el análisis de Scott. Pasan a un segundo plano al centrarse en las interacciones cara a cara en las que individuos y pequeños grupos se enfrentan a la dominación y practican la resistencia.

la historia.[26] Este enfoque socavaba la delimitación antropológica de aldeas y clanes, pero también cuestionaba la taxonomía sociológica de Estados y regiones que facilitaba las grandes comparaciones. A Wolf le queda claro que las figuras dominantes —terratenientes, comerciantes, funcionarios del gobierno y sacerdotes— se sitúan en un punto crucial entre la vida de los campesinos y el mundo más allá de las aldeas que habitan. Estos intermediarios son los nodos de las telarañas y redes de conexión.

Surge una distinción clave, entonces, al comparar a Scott o Guha con Wolf. Parece ser que Wolf, incluso con fines de eficacia expositiva, es reacio a reducir el número de grupos antagónicos descritos en su etnografía. Y está dispuesto a mostrar los grupos sociales estratificados descritos en su obra como formaciones históricamente emergentes en constante interacción en el contexto de procesos sociales y económicos más amplios. Scott, por su parte, trabaja con contrastes fascinantes y destila de las nociones de "costumbre" los elementos que perduran a la hora de dotar de energía política a las aspiraciones campesinas. Sin negar que las costumbres son un conjunto dinámico de prácticas culturalmente específicas, Scott se interesa más por ellas como marcas de identidad de grupo. Tanto en *The moral economy of the peasant* (1976) como en *Weapons of the weak* (1985), explora esas identidades espaciales e históricas que hay que construir y mantener para evitar que el antagonismo de clases haga añicos la previsibilidad necesaria de las vidas rurales pobres en unas condiciones agrarias cambiantes.

Pero lo que está presente tanto en Wolf como en Scott es una aguda conciencia de lo que después de Foucault se estudia más popularmente como microfísica del poder. En este sentido, Scott puede distinguirse de Geertz y otros de la tradición hermenéutica menos atentos a las cuestiones

26 Me refiero aquí al historicismo de Alexander Lesser y al papel pionero que desempeñó al cuestionar el funcionalismo y la sincronicidad, promoviendo al mismo tiempo el estudio del cambio político a lo largo del tiempo, con una mirada aguda a las injusticias permitidas por los Gobiernos contra las minorías y los grupos marginados de la sociedad. Véase Vincent (1990: 191-194), para un relato de las batallas que Lesser libró contra las teorías antropológicas hegemónicas de las décadas de los treinta y cuarenta, y el papel que desempeñó en mantener vivo el interés por el marxismo en el universo de la antropología estadounidense.

de poder, desigualdad social e injusticia. Para citar un solo ejemplo influyente, daré un breve rodeo por la obra de Paul Ricoeur. En el ámbito de la teoría interesada en la mediación simbólica de la acción, Ricoeur (1986) construye un marco que yuxtapone ideología y utopía. Su deseo es facilitar el desarrollo exploratorio de la estructura simbólica de la acción para una descripción de los efectos de las ideas económicas en un marco motivacional, haciendo hincapié en personas reales en condiciones definitivas. Así, Ricoeur, al situar la mediación simbólica de la acción y el contexto determinado de la historia, intenta, acaso, una fusión de Marx y Geertz. Esto pone de manifiesto su noción de ideología como un mecanismo legitimador que nunca cierra del todo la brecha de credibilidad entre la afirmación y la creencia. Ricoeur describe el espacio social en el que la utopía, que haría añicos la ideología dominante, puede existir y convertirse en el centro de los desafíos a la autoridad constituida y su poder incompleto. Esta formulación de la relación entre ideología y utopía se asemeja mucho a la que plantea Scott para la relación entre la indomable transcripción oculta y la transcripción pública: la primera existe justo en el espacio creado para ella por la segunda. Lo que llama la atención en este modelo fuertemente dialéctico es la ausencia total de cualquier concepción de "desigualdad" y, por tanto, de hegemonía. Es en este aspecto vital en el que Scott difiere de los planteamientos de Ricoeur-Greetz sobre la particularidad y la interpretación de los textos sociales. Como nos muestra Scott en *Seeing like a state* (1998), el análisis cuidadoso del poder, ciertamente en un esquema diádico, hace que la versión única de Scott del énfasis en el "conocimiento local" sea más incisiva y esté mejor conectada con estructuras más amplias.

Repensando la hegemonía

Quisiera ahora plantear algunas cuestiones que podrían hacernos reflexionar a la hora de aceptar el completo desmantelamiento de las teorías de la hegemonía que Scott persigue tanto en *Weapons of the weak* (1985) como en *Domination and the arts of resistance* (1990). La idea central de *Weapons of the weak* es demostrar la falacia de explicar la quietud y la

complicidad manifiesta de los pobres en situaciones de explotación como el resultado previsible del control hegemónico ejercido por las ideologías dominantes. Descifrar el lenguaje de la diferencia revela el disimulo. La persistencia obstinada de las transcripciones ocultas y su papel en las formas cotidianas de resistencia campesina es la prueba impecable que se produce en su apoyo. Se argumenta de modo adecuado la implicación crítica de la hegemonía: que el dominio de clase se perpetúa no tanto por las sanciones y la coerción como por el consentimiento y el acatamiento pasivo de las clases subordinadas. Sin embargo, como señala, la hegemonía también se ha tratado como un control político que puede carecer de consentimiento.[27]

La respuesta parece cambiar radicalmente si le tomamos la palabra a Scott cuando afirma que "la hegemonía, por supuesto, puede utilizarse para referirse a todo el complejo de la dominación social" (1985: 316). ¿Por qué? El argumento y los ejemplos que siguen se ofrecen a título ilustrativo, para mantener abierto el debate. Una visión milenarista, un sueño utópico, puede poner en marcha un discurso de inversión que, a su vez, sostiene la transcripción oculta. Sin embargo, el proyecto de superación imaginado en ese discurso revolucionario, redactado en el lenguaje de la ideología dominante, debe ser una limitación hegemónica. Los participantes y creadores de esta narrativa subversiva no parecen desear otra cosa que la restauración de un pasado idealizado o la ruptura de las relaciones de poder actuales, colocando a los que ahora están abajo en la cima del montón. Esto es, en otro sentido, totalmente coherente con el modelo de tensión dialógica y dialéctica entre ideología y utopía, o entre transcripciones públicas y ocultas. Para que el modelo funcione, tiene que definir

27 Véase la nota 17 en la página 315, donde cita el artículo de Perry Anderson. No tenemos razón alguna para creer que esta formidable figura de la nueva izquierda, contemporánea de E. P. Thompson y miembro clave de la tradición gramsciana, se haya equivocado al entender la hegemonía. Por el contrario, su definición se desprende lógicamente de su exhaustivo estudio de los procesos medievales de formación del Estado (Anderson, 1977). De hecho, como sugiero en este artículo, una consideración más sensible del Estado en la política de las aldeas y los procesos de formación del Estado, en los que las localidades se ven invariablemente envueltas, habría permitido una noción más amplia de "hegemonía" que elude la extinción. Por ejemplo, véanse Siu (1989) y Sivaramakrishnan (1999).

"el campo de fuerza común" en el que opera, para volver a la metáfora con la que empezamos.[28]

¿Qué es este campo? Desde una perspectiva geertziana, podría ser una tradición cultural; desde una perspectiva gramsciana, podría ser la hegemonía. En el ámbito político de múltiples capas que consiste en espacios sociales interconectados que atraviesan el continuo que va de lo local a lo global de los ámbitos de acción política —el tipo por el que aboga Wolf— la distinción entre tradición cultural y hegemónica puede llegar a ser borrosa. Si se disolviera la distinción, el marco analítico podría comprender un universo simbólico de discurso basado en relaciones materiales de producción e intercambio que son original e históricamente desiguales, por lo que es probable que recurran a simbolizaciones discordantes. Ciertas simbolizaciones ocupan un lugar central porque coinciden con el mayor poder político y tienen una ventaja hegemónica. Esto les confiere una posición preeminente en la elaboración de las tradiciones dominantes emergentes.[29] Para fundamentar este argumento provisional en *Weapons of the weak* (1985), examinemos el partidismo de las aldeas y cómo cambió en Sedaka, criticado por los aldeanos e influido por el Estado. Como señala Scott, "el modelo de partidismo de las aldeas tiene sus raíces en antiguas facciones familiares que existían mucho antes de la formación de los partidos políticos" (1985: 133). Cuando la política partidista apareció en escena y se aprovechó de estas estructuras de afiliación vertical,

28 En un importante artículo, Partha Chatterjee (2004) sugiere que es probable que los nacionalismos predominantes en las luchas anticoloniales del siglo XX se reinscriban en las guerras contemporáneas contra la hegemonía estadounidense; así, nos recuerda la naturaleza históricamente limitada de las posibilidades políticas disponibles en la política subalterna. Advierte contra un análisis demasiado desconectado de los nuevos imperios de la historia de los imperios; sin embargo, para mis propósitos, ilustra el funcionamiento de un campo de fuerza a escala internacional. En este sentido, aprendemos que ni siquiera las nuevas formas de dominación pueden escapar a la determinación histórica de las formas más antiguas; se trata de un elemento de la hegemonía como aspecto institucionalmente arraigado de la dominación que nunca puede desmantelarse por completo.

29 Por ejemplo, en su nivel más exitoso, las transcripciones ocultas pueden fundar una nueva religión; al hacerlo, sin embargo, rescriben las antiguas en términos de "eliminación de defectos", como puede revelar el estudio de la religión comparada (las ideas de "cielo" e "infierno" parecen ineludibles en la religión organizada).

la protesta pasó a expresarse sobre todo con la metáfora religiosa de los requisitos del islam para una conducta piadosa. ¿No puede verse esto como una reafirmación de la identidad religiosa? Al rechazar las coaliciones laicas que se estaban construyendo en la política de partidos y que se consideraban cómplices de la marginación económica de los pobres, la protesta podía expresar una "nueva" necesidad de identidad de clase, expresada en discursos "antiguos" de sentimiento religioso.

Al fin y al cabo, los excesos del partidismo que afrentaban las "decencias rituales tradicionales" (Scott, 1985: 224) se percibían en conjunción con nuevas direcciones en la contestación, negociación y definición del Estado en la sociedad aldeana. Este proceso se vio agravado por los proyectos de desarrollo patrocinados por los Gobiernos como el plan de mejora de las aldeas. Scott ha descrito cómo este plan causó divisiones y perturbaciones en Sedaka. La división de la aldea por partido político es importante porque delinea los canales por los que se instituyen los esfuerzos activos del Estado por debilitar las insularidades residuales. Ello crea un discurso hegemónico cualitativamente diferente que no se limita a aferrarse a las viejas jerarquías y relaciones de dependencia. Existe una diferencia cualitativa entre el uso de las élites políticas tradicionales como agentes políticos locales y el reclutamiento más amplio de grandes sectores de la aldea en afiliaciones partidistas.

La primera puede considerarse una simple extensión de los acuerdos hegemónicos existentes a estructuras de poder más amplias. Un grupo de élites proporciona el vínculo al llevar una doble existencia en dos sistemas de poder. La segunda surge de la desconstrucción de hegemonías locales más antiguas y su sustitución por comunidades discursivas nuevas, más robustas y orgánicamente conectadas en formaciones hegemónicas regionales. Scott capta las tensiones y luchas inherentes a este proceso cuando dice: "En Sedaka es difícil incluso plantear a alguien la cuestión de la afiliación a un partido sin provocar un descargo de responsabilidad de que, cuando se trata de matrimonio, enfermedad, funerales, o incluso ayudar en una mudanza, el partido no hace ninguna diferencia" (Scott, 1985: 225).

El plan de mejora de la aldea siguió una astuta estrategia para hacer frente a esta tensión. En una situación de escasos recursos, la determinación externa de la pobreza mediante "criterios objetivos", como los ingresos familiares, los niveles nutricionales y la propiedad de la tierra, está siempre en tela de juicio, ya que deriva su legitimidad de un universo moral positivista reñido con la experiencia subjetiva local de la pobreza. Además, tiene el inconveniente de no ser una técnica de evaluación "participativa", ya que se basa en un registro oficial impersonalizado. Así pues, no se hizo. Por el contrario, la delegación de autoridad en la aldea para la selección de los beneficiarios obliga a redefinir el universo moral local desde dentro. Y esto sí se logró. Puesto que los agricultores terratenientes ricos de Sedaka se habían convertido cada vez más en agentes dependientes del Estado, la exigencia de una distribución equitativa de la generosidad en virtud del plan tiene implicaciones para las ideas hegemónicas de modernización en las que se inscribía el plan. Curiosamente, los datos del libro pueden utilizarse para implicar tanto un rechazo de la ideología del desarrollo por parte de todos los sectores del pueblo como su adopción por parte de algunos o todos los grupos, pero en todos los casos la preocupación es quién dejará su impronta en el proceso de formación del Estado. En ese sentido, el debate se desarrolla en el marco hegemónico de la creación de un Estado nacional, la empresa del Gobierno moderno.

Situando la resistencia

Scott se reconoce admirador de varios pensadores anarquistas. Sus simpatías están con Rosa Luxemburgo y no con Lenin. Considera que Jane Jacobs tenía razón y Le Corbusier no.[30] Sin embargo, hay que señalar la ambigua relación de las formas cotidianas de resistencia con el anarquismo. Por un lado, como medio, esa resistencia es anárquica: espontánea, no jerárquica y poco organizada. Por otro lado, como programa es muy modesto y muy poco anárquico: no busca el derrocamiento del Estado, ni siquiera de sus políticas, sino tan sólo mitigar o subvertir sus efectos. Esta

30 Véase Scott (1998), en el que sus argumentos contra el "alto modernismo" y a favor del "metis" se ven subrayados por una lectura comprensiva de la teoría anarquista.

cualidad de la resistencia cotidiana es, en mi opinión, un punto apropiado para entrar en un debate sobre la relación entre la protesta cotidiana, el poder, la hegemonía y la economía moral. Lo haré planteando una serie de preguntas que espero sean provocadoras, y algunos comentarios.

El argumento a favor de la protesta cotidiana parece descansar en el supuesto válido de que el campesinado y la clase terrateniente (o el Estado), mutuamente, perciben la ventaja de evitar la confrontación abierta. Pero esto dice tanto sobre el poder como sobre la resistencia. Resulta aún más importante saber por qué, entonces, ambas partes se involucran en conflictos escalados como los movimientos sociales. ¿Son los enfrentamientos violentos consecuencias imprevistas de las luchas cotidianas, o revelan un interés particular que golpea para consolidarse en un momento en que se percibe una oportunidad? La resistencia cotidiana hace hincapié en una alerta estratégica constante por parte de los implicados que otorga mucho peso a la agencia y al cálculo. Por el contrario, en ocasiones las estructuras sociales, los roles, los estatus y los factores contingentes modifican la agencia y sus consecuencias. Por ejemplo, si nuestros actores son individuos, pueden emprender actos cotidianos de resistencia o desistir de ellos bajo las presiones estructurales de las funciones de liderazgo local, la paternidad o el estatus derivado de los cargos políticos o los puestos ocupados. Si los actores son grupos, entonces se plantea el problema de cómo se crea el consenso, o incluso un mínimo de coordinación, dentro del grupo.

Si la hegemonía es el nivel tolerable de apropiación naturalizada, o al menos consentida, y si la hegemonía se negocia y se altera de manera constante mediante protestas tanto encubiertas como manifiestas, este enfoque sugiere un proceso mutualista y dialéctico en el que el Estado participa de forma integral. *Hegemony*, tal como la recupera T. J. Jackson Lears, es relevante en este caso. Lears escribe: "Como Gramsci entendía, la cultura hegemónica no depende del lavado de cerebro de las 'masas', sino de la tendencia del discurso público a hacer que alguna forma de experiencia esté fácilmente disponible para la conciencia, mientras se ignoran o suprimen otras" (Lears, 1985: 577). Thompson (1975a) nos recuerda que el crimen como resistencia se llevó a cabo en el marco de una ley que nunca se adaptó por completo a los estrechos propósitos de clase. Cuando se

establecieron normas de procedimiento y justicia, a veces iban en contra de los intereses dominantes, y esto se hizo en el espíritu más amplio del estado de derecho. Dado que la ley prometía un reino de normas universales con implicaciones utópicas, su significado podía impugnarse; como sugiere Thompson, la hegemonía podía negociarse mediante un fondo de valores que los pobres extraían de la ley.

Por tanto, me gustaría sugerir que, aunque el concepto de formas cotidianas de resistencia proporciona una redefinición positiva de la protesta y amplía el campo de visión de una forma muy valiosa, se obtendrá una imagen más completa a partir de un debate asimismo minucioso sobre el ejercicio cotidiano del poder —lo que Douglas Haynes y Gyan Prakash han denominado la "intersección entre poder y resistencia, y los complejos procesos en los que ambos se entrelazan constantemente" (1992: 19)—. Los demás artículos de "In Focus" ofrecen muchas pistas e indicaciones útiles para un proyecto de este tipo. Los diferentes niveles del Estado pueden trabajar con objetivos contrapuestos, incluso cuando se trata de cosas tan básicas para los intereses del Estado como los impuestos, los préstamos agrícolas y las relaciones laborales rurales. Las formas cotidianas de resistencia a un nivel del Estado pueden jugar a favor de otro nivel. Una vez más, por poner un ejemplo, consideremos una situación en la que el Estado puede consistir en una coalición informal de kulaks, empresarios industriales y una burguesía profesional urbana, una tipología que Pranab Bardhan (1984) utiliza para el Estado indio. A menudo resulta difícil para los pequeños agricultores averiguar quién es responsable de qué política entre el confuso abanico que afecta sus vidas. Por tanto, también es difícil tener un plan de resistencia convincente que trace una línea fiable entre el acto de resistencia y el resultado de mejora.

Esta conclusión tiene implicaciones para la resistencia cotidiana, omnisciente y estratega como modelo subalterno. También se basa en la lógica de que los modos específicos de resistencia (en especial cuando están revestidos de la aparente inocuidad de las formas cotidianas) sólo son eficaces en relación con determinadas formas de dominación. Thompson ilustra muy bien este punto en su análisis de las cartas anónimas. Muestra cómo las cartas se relacionaban con conflictos industriales, contextos agrarios y

disturbios alimentarios de un tipo particular "en los que daban publicidad a un curioso tipo de diálogo entre las autoridades y la multitud" (1975a: 270). Aunque es correcto subrayar que la resistencia cotidiana se centra en el punto de aplicación de la ley para minimizar la dominación, la estrategia precisa depende de saber de dónde procede la dominación, es decir, de una lectura de las intenciones inherentes a la dominación. Tomemos el caso de la caza furtiva o de la ocupación ilegal y las distinciones que hace Douglas Hay (1975) entre la caza furtiva y el robo. La definición de estos actos como delitos presupone un marco en el que los detonadores del poder han reasignado los recursos naturales implicados como propiedad exclusiva de clases específicas o han establecido una escala de derechos a los que los delitos deben corresponderse como repudio, al definirlos como *resistencia*.

En esta cuestión convergen Foucault y Thompson.[31] Foucault (1979: 85) señala que con la intensificación de la agricultura se ejerció una presión cada vez más restrictiva sobre las ilegalidades aceptadas, lo que desplazó los usufructos consuetudinarios a la categoría de "robo". La ilegalidad de los derechos se separó de otra clase de ilegalidad que Foucault denomina la "ilegalidad de la propiedad" (1979: 87). Aunque el primero siguió siendo un privilegio de las clases altas, el segundo se convirtió en el atroz delito de los estratos más bajos. En una línea similar, Thompson (1975b) analiza la redefinición de delito y castigo. Sitúa la Ley Negra de 1723 en el contexto de un marco jurídico más represivo en general que estaba surgiendo y escribe: "Lo que ahora debía castigarse no era un delito entre [hombres…] sino un delito contra la propiedad" (1975b: 207). También sostiene que la ley, las estrategias de dominación y la apropiación

31 No es una cuestión fácil de plantear. Tampoco tengo espacio aquí para elaborarlo y defenderlo contra algunas miradas sorprendidas que se lanzarán a esta aseveración. Soy consciente, incluso al afirmar este punto, de que existen diferencias filosóficas sustanciales en la forma en la que Foucault y Thompson —quien, en este sentido, forma parte del mismo grupo que Gramsci, Bourdieu y Scott— entienden el poder. Mitchell (1991) analiza de manera amplia estas diferencias en su extensa crítica de *Weapons of the weak* (1985). Pero no estoy totalmente convencido de la incompatibilidad de los enfoques. En última instancia, Scott se centró de modo implacable en la acción política; además, cuando la micropolítica es el objeto de estudio, los enfoques marxista, cultural y posestructuralista no son incompatibles en sus descripciones del poder, sus flujos y sus repudios.

emergen de situaciones contingentes específicas y de la forma en la que se entrecruzan con las ideologías, los intereses y las percepciones de estas contingencias por parte de las elites (1975b: 214). Hacia el final del libro de Thompson, en un extenso debate sobre el derecho, su creación y legitimación, Thompson expone con agudeza lo que yo quiero decir sobre la inseparabilidad de la resistencia y el poder: "La ley era a menudo una definición de la práctica agraria real […] profundamente imbricada en la base misma de las relaciones productivas" (Thompson, 1975b: 216). Esta es una afirmación que puede hacerse sobre la protesta cuando está arraigada en la resistencia cotidiana.

Es correcto decir que las formas cotidianas de resistencia tienen que ver con los usos y costumbres. Pero, como advierte Sally Falk Moore (1986), la costumbre no es una entidad fija. Señala, con razón, que el mero examen de casos puede poner de relieve la continuidad, cuando el acto de dar un paso atrás y observar la economía política en sentido amplio revela los cambios en las costumbres, porque "el lugar peculiar de cualquier sistema de instituciones oficiales sólo puede hacerse visible en relación con la vida fuera de ellas" (1986: 209). Describiendo la instauración del derecho secular en Kilimanjaro, Moore muestra cómo los magistrados desarrollaron un discurso judicial basado en una definición estricta de los casos, una interpretación formal de las normas y una normalización burocrática del ámbito consuetudinario (1986: 302-305). Fue justo la intención del derecho moderno de confinar el margen de negociación que implicaba la costumbre. La disputa sobre el derecho consuetudinario a menudo no se refiere tanto de las cantidades o del carácter de los privilegios en cuestión, sino sobre la propia negociabilidad contingente de la costumbre que está en peligro cuando acuerdos jurídicos más formales amenazan con sustituirla o cosificarla.

Otro ejemplo de la obra de Scott (1987) puede servir para ilustrar este punto. Consideremos su análisis de la forma en que el campesinado malayo subrayaba la naturaleza voluntaria e intermitente de los pagos del *zakat peribadi* a los pobres locales al imam, antes de que el *zakat raja* se convirtiera en un gravamen del Estado. Lo que también queda claro en Scott (1987: 428, n. 18) es que las demandas inflexibles del Estado tienen consecuencias

materiales adversas cuando hay una compresión de costos y precios en las ganancias agrícolas, los ingresos brutos disminuyen y se reducen los rendimientos. Pero se experimentan culturalmente a través de un mundo de relaciones Estado-campesino, en el que el Estado se ha implicado de forma más directa en el proceso de producción agrícola. Sin embargo, el mismo Estado está menos dispuesto a compartir en las vicisitudes del proceso y esto socava la negociabilidad de la economía moral. Este comentario sobre la noción de "economía moral" es algo que los críticos de la idea suelen pasar por alto. Yo sostengo que el aspecto valioso de la economía moral no es el aspecto de reciprocidad benigna imaginada que la gente ha decidido atacar (Desan, 1989), llevando así su crítica por un camino sin importancia. En cambio, lo importante es que, dentro de unos límites, la economía moral permitía legítimamente la negociación de derechos y obligaciones que la regulación impersonal racional hacía cada vez más difícil. La delincuencia y otras formas de resistencia cotidiana deben verse a la luz de este concepto de "economía moral". Creo que no estoy redefiniendo la economía moral a mi antojo, porque Thompson (1991) proporciona una redefinición tan cuidadosa del concepto.[32]

La agricultura de la revolución verde, el urbanismo del alto modernismo o la silvicultura industrial, todos ellos vehículos en los que el Estado desarrollista ha pisoteado las vidas de los campesinos, pobres y minorías étnicas o raciales de Asia y África, recibieron la atención de Scott en *Seeing like a state* (1998). En esta obra, Scott volvió sobre un tema recurrente en su obra: las condiciones en las que se derrumban las economías morales y las consecuencias de dicho derrumbe. Pero en *Seeing like a state* lo hace desde la perspectiva de por qué los Estados modernos deben necesariamente romper los lazos del mutualismo entre sus aspiraciones y las de sus ciudadanos o súbditos. Se pregunta qué hay en la patología de los sistemas estatales modernos que les hace trabajar no tanto para volver a tejer el tejido de la dependencia entre los poderosos y los subalternos, sino, por el contrario, para destrozarlo. No me extenderé en el análisis de

32 En realidad, E. P. Thompson critica duramente a personas como Paul Greenough (1982), que, en su opinión, hacen un uso más estático del concepto.

este último libro porque otros artículos de esta sección "In Focus" lo han hecho con gran elegancia y perspicacia.

Agradecimientos

Un emprendimiento tal me hace pensar en la posibilidad de dar gracias a todas las personas con las que he estudiado o de las que he aprendido alguna vez. La lista sería demasiado larga. Debería solo agradecer a todos aquellos cuyos caminos se cruzaron con el mío en Estudios Agrarios, ya que las conversaciones que resultaron de esos encuentros fueron sin duda el estímulo de este capítulo y de mi introducción a esta colección. Mis diálogos con James Scott comenzaron gracias a su extraordinaria generosidad como académico, mentor y amigo. No son regalos que pueda devolverle recíprocamente. Agradezco a dos revisores anónimos de *AA*, y a los editores de *American Anthropologist*, sus comentarios sobre el borrador de este artículo. Responder a ellos, sin duda, lo ha mejorado. También deseo dejar constancia de mi gratitud a una beca del American Council of Learned Societies, Nueva York, y al College of Arts and Sciences, de la Universidad de Washington, Seattle, por su apoyo suplementario. Todo ello me ha permitido tomarme un año libre de mis múltiples obligaciones docentes y administrativas para completar esta obra. Por supuesto, sigo siendo el único responsable de sus deficiencias restantes.

Referencias

Anderson, P. 1977. *Transitions from antiquity to feudalism*. New Left Books.

Aston, T. H. y C. H. E. Philpin. 1987. *The Brenner debate: agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe*. Cambridge University Press.

Bardhan, P. 1984. *The political economy of development in India*. Oxford University Press.

Berry, S. 1985. *Fathers work for their sons: accumulation, mobility, and class formation in an extended Yorùbá community*. University of California Press.

Bloch, M. 1961. *Feudal society. Vol.1: The growth of ties of dependence*. Chicago University Press.

Bloch, M. 1975. *Marxist analyses and social anthropology*. Malaby Press.

Blok, A. 1972. *The mafia of a Sicilian village (1860-1960): an anthropological study of political middlemen*. University of Amsterdam Press.

Bourdieu, P. 1977. *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Chatterjee, P. 2004. Empire after Globalization. *Economic and Political Weekly*, *39*(37), 4155-4164.

Chaturvedi, V. (ed.). 2000. *Mapping subaltern studies and the postcolonial*. Verso.

Cohn, B. y N. Dirks. 1988. Beyond the fringe: the nation-state, colonialism and the technologies of power. *Journal of Historical Sociology*, *1*(2), 224-229.

Comaroff, J. y J. Comaroff. 1991. *Of revelation and revolution, vol. 1: Christianity, colonialism, and consciousness in South Africa*. University of Chicago Press.

Desan, S. 1989. Crowds, community and ritual in the work of E. P. Thompson and Natalie Davis. En L. Hunt (ed.). *The new cultural history* (47-71). University of California Press.

Edelman, M. y A. Haugerud. 2004. Introduction: The anthropology of development and globalization. En M. Edelman y A. Haugerud (eds.). *The anthropology of development and globalization: from classical political economy to contemporary neoliberalism* (1-74). Blackwell.

Foucault, M. 1979. *Discipline and punish: the birth of the prison*. Trad. de A. Sheridan. Vintage / Random House.

Geertz, C. 1973. *The interpretation of cultures*. Basic Books.

Gough, K. 1981. *Rural society in Southeast India*. Cambridge University Press.

Gramsci, A. 1971. *Selections from the prison notebooks*. Ed. De Q. Hoare y G. N. Smith. Lawrence and Wishart.

Greenough, P. 1982. *Prosperity and misery in modern Bengal: the famine of 1943-1944*. Oxford University Press.

Guha, R. 1983. *Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India*. Oxford University Press.

Hart, G., A. Turton y B. White (eds.). 1989. *Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia*. University of California Press.

Hay, D. 1975. Poaching and the game laws on cannock chase. En D. Hay, P. Linebaugh, J. G. Rule, E. P. Thompson y C. Winslow (eds.). *Albion's fatal tree: crime and society in eighteenth century England* (189-254). Pantheon.

Haynes, D. y G. Prakash. 1992. Introduction: The entanglement of power and resistance. En D. Haynes y G. Prakash (eds.). *Contesting power: resistance and everyday social relations in South Asia* (1-22). University of California Press.

Hegel, G. W. F. 1977. *The phenomenology of the spirit*. Clarendon Press.

Herzfeld, M. 1985. *The poetics of manhood: contest and identity in a cretan mountain village*. Princeton University Press.

Hobsbawm, E. 1981. *Bandits*. Pantheon Books.

Hobsbawm, E. y G. Rudé. 1968. *Captain Swing*. Pantheon Books.

Holmes, D. 1989. *Cultural disenchantments: worker peasantries in Northeast Italy*. Princeton University Press.

Kahn, J. 1980. *Minangkabau social formations: Indonesian peasants and the world economy*. Cambridge University Press.

Lears, T. J. Jackson. 1985. The concept of cultural hegemony: problems and possibilities. *American Historical Review*, *9*, 567-593.

Ludden, D. (ed.). 2001. *Reading subaltern studies: critical history, contesting meaning, and the globalization of South Asia*. Permanent Black.

Mitchell, T. 1991. Everyday metaphors of power. *Theory and Society*, *19*, 545-577.

Moore, S. F. 1986. *Social facts and fabrications: "customary" law on Kilimanjaro, 1880-1980*. Harvard University Press.

Nelson, C. y L. Grossberg (eds.). 1988. *Marxism and the interpretation of culture*. University of Illinois Press.

Ranajit G. (ed.). 1982-87. *Subaltern studies: writings on South Asian history and society. Vols. 1-5*. Oxford University Press.

Ricoeur, P. 1986. *Lectures on ideology and utopia*. Ed. de G. H. Taylor. Columbia University Press.

Roseberry, W. 1983. *Coffee and capitalism in the Venezuelan Andes*. University of Texas Press.

Roseberry, W. 1989. *Anthropologies and histories: essays in culture, history and political economy*. Rutgers University Press.

Roseberry, W. 1995. The cultural history of peasantries. En J. Schneider y R. Rapp (eds.). *Articulating hidden histories: exploring the influence of Eric R. Wolf* (51-66). University of California Press.

Samuel, R. y G. Stedman Jones (eds.). 1983. *Culture, ideology and politics: essays for Eric Hobsbawm*. Routledge / Kegan Paul.

Schneider, J. 1995. Introduction: The analytical strategies of Eric Wolf. En J. Schneider y R. Rapp (eds.). *Articulating hidden histories: exploring the influence of Eric R. Wolf* (3-30). University of California Press.

Scholte, B. 1986. The charmed circle of Geertz's hermeneutics: a neo-marxist critique. *Critique of Anthropology*, *6*(1), 5-15.

Scott, J. C. 1976. *The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.

Scott, J. C. 1977. Hegemony and the peasantry. *Politics and Society*, *7*(3), 267-296.

Scott, J. C. 1985. *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Scott, James C. 1987. Resistance without protest and without organization: peasant opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe. *Comparative Studies in Society and History*, *29*, 417-452.

Scott, J. C. 1990. *Domination and the arts of resistance: hidden transcripts*. Yale University Press.

Scott, J. C. 1993. *Everyday forms of resistance*. PRIME Occasional Papers, 15. International Peace Research Institute.

Scott, J. C. 1998. *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Scott, J. C. 1999. Foreword. En R. Guha, *Elementary aspects of peasant insurgency in Colonial India*. Duke University Press.

Siu, H. F. 1989. *Agents and victims in South China: accomplices in rural revolt*. Yale University Press.

Sivaramakrishnan, K. 1995. Situating the subaltern: history and anthropology in the subaltern studies project. *Journal of Historical Sociology*, *8*(4), 395-429.

Sivaramakrishnan, K. 1999. *Modern forests: statemaking and environmental change in colonial Eastern India*. Stanford University Press.

Smith, G. 2003. Hegemony. En D. Nugent y J. Vincent (eds.). *A companion to the anthropology of politics* (216-230). Blackwell.

Thompson, E. P. 1971. The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past and Present*, *50*, 76-136.

Thompson, E. P. 1975a. The crime of anonymity. En D. Hay, P. Linebaugh, J. G. Rule, E. P. Thompson y C. Winslow (eds.). *Albion's fatal tree: crime and society in eighteenth century England* (255-308). Pantheon.

Thompson, E. P. 1975b. *Whigs and hunters: the origins of the Black Act*. Pantheon.

Thompson, E. P. 1978. Eighteenth century English society: class struggle without class. *Social History*, *3*(2), 133-165.

Thompson, E. P. 1991. *Customs in common: studies in traditional popular culture*. New Press.

Tilly, C. 1984. *Big structures, large processes, huge comparisons*. Russell Sage Foundation

Tsing, A. L. 2003. Agrarian allegory and global futures. En P. Greenough y A. Lowenhaupt Tsing (eds.). *Nature in the global South: environmental projects in South and Southeast Asia*. (124-169). Duke University Press.

Vincent, J. 1990. *Anthropology and politics: visions, traditions, and trends*. University of Arizona Press.

Watts, M. 1983. *Silent violence: food, famine, and peasantry in Northern Nigeria*. University of California Press

Williams, R. 1973a. Base and superstructure in marxist cultural theory. *New Left Review*, *82*, 3-16.

Williams, R. 1973b. *The country and the city*. Oxford University Press.

Williams, R. 1977. *Marxism and literature*. Penguin.

Wolf, E. 1966. *Peasants*. Prentice Hall.

Wolf, E. 1969. *Peasant wars of the twentieth century*. Harper and Row.

10. Certezas deshechas: cincuenta turbulentos años de antropología jurídica, 1949-1999[1]

Sally Falk Moore

Resumen: Este artículo revisa el alcance cada vez mayor de los estudios antropológicos del derecho entre 1949 y 1999, y considera cómo el trasfondo político de este periodo puede verse reflejado en las perspectivas académicas anglosajonas. A mediados de siglo, las ideas y prácticas jurídicas de los pueblos no occidentales, especialmente sus formas de gestión de conflictos, se estudiaron en el contexto de la dominación colonial. Surgieron y perduraron dos grandes escuelas de pensamiento. Una consideraba que los conceptos culturales eran fundamentales en la interpretación del derecho. La otra se centraba más en el entorno político y económico, y en las prácticas que procuran el beneficio propio. Continuaron los estudios sobre el derecho en comunidades no occidentales, pero a partir de los años sesenta y setenta una nueva corriente se concentró en las cuestiones de clase y dominación dentro de las instancias jurídicas de Occidente. Las posibilidades de análisis se ampliaron cuando se prestó atención al hecho de que el Estado no era la única fuente de normas imperativas, sino que existían muchos otros lugares donde las normas se generaban y se ejercía el control social. Este fenómeno heterogéneo pasó a denominarse "pluralismo jurídico". El trabajo de medio siglo ha culminado en estudios de concepción amplia y compromiso político que abordan los derechos humanos, los requisitos de la democracia y los obstáculos para su desarrollo.

¿Qué ámbitos jurídicos han examinado los antropólogos en este periodo de cincuenta años que estamos considerando? ¿En qué medida han cambiado estos temas? ¿En qué medida esta transformación en los temas refleja el inestable

1 Esta ponencia se presentó originalmente como conferencia en memoria de Huxley en la Universidad de Manchester en 1999, en la sesión inaugural de un simposio que celebraba el quincuagésimo aniversario de la fundación del Departamento de Antropología de Manchester. Publicado originalmente en: Sally Falk Moore, 2001, "Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949–1999", *Journal of the Royal Anthropological Institute* 7(1): 95–116.

trasfondo político de la época? El panorama general es bastante sencillo. Lo que en su día fue un subcampo de la antropología dedicado en buena parte al derecho en las sociedades no occidentales ha evolucionado hasta abarcar una geografía jurídica mucho más amplia. En la actualidad, la antropología jurídica no solo estudia los países industrializados, sino que se ha extendido desde lo local hacia asuntos jurídicos nacionales y trasnacionales. Su ámbito incluye los tratados internacionales, los fundamentos jurídicos del comercio transnacional, el campo de los derechos humanos, las diásporas y los inmigrantes, los refugiados y los presos, así como otras situaciones que no fácilmente se incluían en la concepción anterior de la antropología centrada en la comunidad, aunque la rica tradición de los estudios locales continúa por una vía separada y paralela.

Esta expansión y cambio ha implicado cambios en la metodología y el énfasis teórico. Durante mucho tiempo, el análisis de las disputas fue central en el campo, siendo el conocimiento de las normas y prácticas locales un elemento esencial. En la actualidad, aunque el estudio de los conflictos continúa siendo privilegiado para adentrarse en un área controvertida, los objetos de estudio más recientes constituyen amplios campos de acción no susceptibles a la observación directa. La naturaleza actual del Estado y los ámbitos económicos y políticos transnacionales y supralocales que se entrecruzan con los Estados son las entidades que hoy en día provocan un mayor interés intelectual. En este artículo examinaremos las cuestiones que la antropología jurídica abordó hace cincuenta años y trazaremos su progreso gradual hacia estos nuevos problemas. Se trata necesariamente de un relato selectivo que, en la medida de lo posible, tome en cuenta la resonancia de los acontecimientos políticos de fondo. Los cambios en el enfoque empírico de la antropología jurídica han incluido desacuerdos sobre cómo abordar y responder la pregunta de cómo y por qué lo jurídico adquiere una forma particular en un entorno social concreto. Para simplificar, puede decirse que han prevalecido tres interpretaciones generales.

El derecho como cultura

La primera interpretación sugiere que el derecho se rige por la tradición, sobre todo fuera de Occidente, pero a veces dentro de él. La cultura lo es todo. Sin embargo, la cultura es simplemente una etiqueta que denota costumbres, ideas,

valores, hábitos y prácticas duraderas. Los que observan el derecho como cultura sugieren que el derecho es un componente particular de ese conjunto y que la totalidad combinada tiene conexiones sistémicas internas.

El énfasis en el poder restrictivo de "lo tradicional" puede encontrarse en las concepciones coloniales del "derecho consuetudinario" de los pueblos sometidos, y está profundamente arraigado en la visión de Durkheim (1961) sobre lo que llamó "las formas elementales de unanimidad social". También se encuentra en la concepción de Weber (1978: 226-40) de la "autoridad tradicional". Esta perspectiva se presenta en algunos de los escritos de Habermas (1979: 78-84, 157) sobre la evolución del derecho y la sociedad. Una poderosa versión del argumento cultural se encuentra en el comentario de Geertz (1983: 232-3) acerca del derecho, y la tradición también ocupa un lugar destacado en el libro de texto de Rouland (1988).

En cierto momento, el contexto cultural proporcionó a algunos antropólogos una explicación descriptiva en apariencia inocente sobre las variaciones en los valores y estilos de vida (véase Hoebel, 1954). Pero la cultura ha perdido su inocencia política. Hoy, cuando la diferencia cultural se ofrece como legitimación y explicación de la diferencia jurídica, el contexto cultural surge con frecuencia como parte de una identidad colectiva conscientemente movilizada en medio de una lucha política, y se plantea en relación con las constituciones, las desigualdades colectivas, a aquellos que pertenecen y a los externos, así como a otros aspectos de la política nacional y étnica.

El derecho como dominación

La segunda explicación común de la forma jurídica supone que todo en el derecho puede entenderse como un velo que esconde los intereses de las elites, tanto en Occidente como en otros sitios. Así, el derecho pretende promover el interés general, pero, en realidad sirve, a causa de los poderosos, por lo general a los capitalistas y el capitalismo. (La contraparte conservadora, el argumento jurídico y económico sobre la eficiencia, no se ha incorporado a la literatura antropológica).

El argumento del "interés de las elites" es marxista en su estilo. Una versión de este se encuentra en Bourdieu (1987: 842), en la obra del Movimiento de Estudios Jurídicos Críticos (Fitzpatrick, 1992; Fitzpatrick y Hunt, 1987; Kelman, 1987) y en otros lugares. Por ejemplo, consideremos el comentario de Snyder (1981a: 76) sobre Senegal: "Elaborada en circunstancias históricas particulares, la noción de 'derecho consuetudinario' era una ideología de la dominación colonial".

El derecho como solucionador de problemas

Algunos antropólogos (y muchos juristas) ofrecen una tercera explicación que es técnica y funcional. El derecho es una respuesta racional a los problemas sociales. Esta es la explicación consagrada en muchas opiniones de apelación, así como en escritos sociológicos. En esta comprensión, el derecho es un dispositivo de resolución de problemas y minimización de conflictos, al que se arriba de forma consciente por medio del pensamiento racional en Occidente y en otros lugares. Recientemente, Ann Marie Slaughter, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Harvard, expresó de forma concisa lo que es común en las facultades de Derecho: "Veo el derecho como una herramienta de resolución de problemas" (com. pers.).

Este marco racionalista se utiliza de manera amplia en la profesión jurídica y es una de las bases de la modernidad en la sociología de Weber. La concepción del derecho esencialmente como solución a problemas también está integrada en los ensayos del conocido jurídico realista Karl Llewellyn, quien se interesó por la antropología y escribió un libro sobre los cheyennes (en Llewellyn y Hoebel, 1941; para una breve crítica, véase Moore, 1999). Sin embargo, es importante señalar que Llewellyn no partió del supuesto weberiano sobre el monopolio del pensamiento jurídico sofisticado de la sociedad occidental (y la modernidad en general). De hecho, atribuyó este modo de pensar a los cheyenes.

Estas tres explicaciones académicas del derecho —como cultura, como dominación, como solución de problemas— se repiten a lo largo de los cincuenta años que revisaremos aquí, a menudo mezcladas entre sí. Mi revisión hará hincapié

en los estudios de campo y en el trasfondo político general de la antropología jurídica. Se prestará gran atención a las contribuciones anglófonas, pero estas no constituyen, de ninguna manera, la historia completa. Razones de espacio limitan lo que puedo discutir. No solo debo omitir la contribución de escritores franceses, holandeses y de otras nacionalidades, sino que también debo excluir buena parte del material anglófono.[2] Mi enfoque es en parte cronológico y en parte conceptual. Los temas se mencionan conforme emergen históricamente, pero rastros subsecuentes de las mismas ideas se seguirán más adelante a medida que reaparecen. Esto desordena la cronología, pero ilumina las continuidades de la subdisciplina.

---

2 Hay dos ámbitos que no tengo espacio para tratar, pero que son tan importantes que al menos deben mencionarse aquí. Uno es el estudio de la propiedad, el otro es el de la sociolingüística del derecho.

La propiedad. La idea de propiedad es objeto de un amplio y rico material que no se presta para una breve caracterización. Abarca desde el parentesco hasta la herencia, desde la "propiedad" colectiva hasta la individual de la tierra, desde la redistribución de la tierra hasta el desarrollo económico, y mucho más (véase Low [1996] sobre los intentos mundiales de redistribuir la tierra; Peters [1994] sobre la división de los bienes comunes).

En el contexto del desarrollo económico, los sistemas de tenencia de la tierra han recibido a menudo la atención de los antropólogos. Cuatro instituciones en particular están asociadas a este trabajo. El Laboratoire d'Anthropologie Juridique de París, dirigido por M. Alliot y E. Le Roy, y el Centre Droit et Cultures de la Universidad de París X-Nanterre, fundado por R. Verdier, han elaborado estudios sobre los sistemas de propiedad africanos. El Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de tenencia de la tierra en todo el mundo. En la Universidad Agrícola de Wageningen (Países Bajos), F. von Benda Beckmann se centra en la propiedad en Indonesia. Junto con K. von Benda Beckmann, ha elaborado una importante serie de publicaciones (1979; 1985; 1994; con H. Spiertz, 1996).

Enfoques sociolingüísticos del derecho. Varias publicaciones esclarecedoras y relativamente recientes utilizan técnicas sociolingüísticas para analizar materiales jurídicos (por ejemplo, Conley y O'Barr 1990; 1998; Mertz, 1994; O'Barr, 1982). El análisis de la forma de los textos jurídicos, la atención a las disciplinas verbales empleadas en los procedimientos jurídicos y el tratamiento del discurso como texto han sido adiciones metodológicas significativas al conjunto de herramientas de la antropología jurídica.

Un trabajo reciente en particular claro y sutil que muestra lo que se puede hacer es el de Hirsch (1998). Utiliza un análisis lingüístico detallado para mostrar el efecto del discurso de género en los litigios en África Oriental. Demuestra que el lenguaje utilizado por las mujeres para describir su situación, presentar reclamaciones y llevar a cabo disputas legales describe e ilustra al mismo tiempo su situación y cómo se sienten al respecto.

No cabe duda de que la atención a la dimensión lingüística de lo jurídico irá en aumento. Al fin y al cabo, es la ley la que confiere a muchas declaraciones performativas y actos escritos su eficacia autoritativa última.

Gluckman y los fundamentos de los jueces: razonamiento, razonabilidad y normas

Gluckman fue el autor dominante en los estudios de derecho y antropología hacia mediados del siglo y más adelante (para valoraciones, véase Gulliver [1978]; Werbner [1984]), y se situó en la transición del África colonial a la poscolonial. Realizó trabajo de campo en ese continente durante el periodo colonial, pero continuó publicando influyentes trabajos sobre diversos temas hasta bien entradas las primeras décadas de la independencia.

A la manera clásica de la antropología social británica de la época, le interesaba descubrir cuál había sido la forma de la sociedad precolonial, la "verdadera" África. Sin embargo, nadie era más consciente que Gluckman sobre que lo que realmente observaba eran sociedades africanas que habían experimentado décadas de dominio colonial, migración laboral, influencia cristiana, alteraciones de la economía y la organización, y mucho más. Intentó comprender las dos Áfricas al mismo tiempo, su pasado histórico y el presente vivo. Además, fue el primer antropólogo que estudió de manera sistemática un tribunal colonial africano en acción, escuchando con atención las historias de las quejas y los argumentos que se desarrollaban.

Hasta ahora, el derecho en África se presentaba por lo general como un conjunto de normas consuetudinarias establecidas por los jefes y otras autoridades. Se suponía que estas supuestas normas consuetudinarias debían utilizarse como directrices en los tribunales coloniales (véase, por ejemplo, Gluckman [1969]). No obstante, el derecho consuetudinario era, de hecho, una versión tan alterada de la práctica indígena que era necesario observarla como una elaborada construcción colonial. Esto comenzó a reconocerse en la discusión de Fallers (1969) sobre el derecho soga y en los escritos de Colson (1971) sobre la propiedad de la tierra, y explicitado de forma inequívoca por Snyder (1981a; 1981b), Chanock (1985 [1998]) y Moore (1986b).

En la época de Gluckman, se suponía que el derecho consuetudinario era en gran medida una expresión de la tradición indígena, y cuando Gluckman observaba disputas y escuchaba decisiones, prestaba atención a las normas y al razonamiento. Intentaba averiguar qué norma aplicaban los jueces, qué estándar

de comportamiento razonable se utilizaba. Esto no siempre era fácil ni sencillo, pues los jueces del más alto tribunal Lozi a menudo discrepaban entre sí.

Gluckman distinguió las normas Lozi de los principios lógicos utilizados por los jueces para decidir qué norma aplicar, cómo y cuándo aplicarla. Su argumento era que, si bien las normas Lozi eran específicas para su sociedad, el razonamiento jurídico Lozi se basaba en principios lógicos presentes en todos los sistemas jurídicos. Algunos análisis posteriores interpretaron esto como una falsa occidentalización del derecho Lozi. Sin embargo, los críticos no advirtieron que esta interpretación universalista encarnaba una posición política (Gluckman, 1955: 362). Gluckman quería demostrar que los sistemas y prácticas jurídicas indígenas africanas eran tan racionales, en el sentido weberiano, como los occidentales. Sus premisas eran diferentes porque el entorno social era distinto, pero la lógica y el proceso de razonamiento eran los mismos. Para demostrar que los africanos eran, en todos los sentidos, intelectualmente equivalentes a los europeos, mostró con un tedioso detalle (1955: 279-80) lo que él consideraba similar entre el pensamiento jurídico africano y el occidental. Inmerso en su análisis de las ideas Lozi, había un espléndido mensaje sobre la igualdad racial.

Diez años más tarde, en una serie de conferencias, Gluckman (1965) comentó las concepciones constitucionales Barotse, así como las ideas sobre la propiedad, las nociones de delito y responsabilidad, y las comprensiones de contrato, obligación y deuda. Sin embargo, de nuevo su preocupación era otra: la comparación. Argumentaba que ciertos conceptos Barotse eran característicos de sociedades con una economía política simple: una economía simple, tecnología limitada, un orden político-social rudimentario. Su enfoque comparativo merece un estudio más profundo, pero hasta hace poco los trabajos de este tipo habían prácticamente desaparecido, en parte debido a graves problemas metodológicos.[3] No obstante, antes

3 Hay algunas excepciones al abandono de la comparación. Por ejemplo, Newman (1983) utiliza un enfoque marxista combinado con comparaciones cuantitativas al estilo de Murdock. Para nuevos tipos de comparación, véase Greenhouse (1996) y Bowen y Petersen (1999). Por supuesto, el derecho comparado sigue siendo una especialidad dentro de la profesión jurídica e implica algunos de los mismos problemas teóricos relacionados con lo que se está comparando que los antropólogos han abordado (véase Moore [1986b]; Riles [1999]).

de que estos problemas fueran reconocidos, Nader exploró la posibilidad de que comparar técnicas de gestión de disputas de diferentes sociedades pudiera conducir a ideas fructíferas (véase Nader [1969]; Nader y Todd [1978]). Con el tiempo, los antropólogos jurídicos decidieron al final que no podían resolver los problemas de forma, función y contexto que planteaban este tipo de comparaciones. Sin embargo, estas cuestiones vuelven a considerarse de nueva cuenta.

En la actualidad, lo que sorprende es hasta qué punto Gluckman (en particular en 1955 y 1965) estaba preocupado por una interpretación de la lógica africana sin sesgos racistas y una interpretación evolucionista de la economía política africana. Estas preocupaciones muestran el razonamiento de un antropólogo que estaba políticamente del lado de los africanos, pero que observaba en sus sistemas sociales y conceptos jurídicos residuos sustanciales de una economía anterior, precapitalista. No parece insignificante que, entre la publicación de su primer libro y el segundo, la era colonial hubiera terminado en la mayoría de los países africanos. En su opinión, Gluckman había logrado identificarse a un tiempo con Marx y Maine.

Lo más importante de mi apresurado resumen de algunos de los argumentos de Gluckman sobre el derecho es que él inició una revolución en el método de campo al prestar atención a los casos en los tribunales. Desde entonces, la observación de litigios locales ha sido una forma primordial de voyeurismo social en la antropología jurídica (para un ejemplo reciente, véase Caplan [1995]). Lo dicho hasta aquí sugiere por qué Gluckman no solo fue el fundador del Departamento de Manchester, sino también quien propició muchas controversias duraderas, algo muy positivo para el ámbito académico.

El derecho como expresión de premisas culturales básicas, y a menudo únicas

Una de las principales críticas que de inmediato se lanzaron contra la comprensión universalista de Gluckman de la lógica jurídica fue el argumento contrario de Bohannan (1957) sobre que, en derecho, como en todo lo demás, cada cultura

es única y que, para la antropología, su singularidad es lo importante. Bohannan sostenía que incluso traducir los conceptos jurídicos de otra sociedad al inglés constituye una distorsión. La suya es una de las versiones más extremas del argumento apolítico del "derecho como cultura". Sus explicaciones fueron objeto de un acalorado debate en una conferencia de Gluckman en la década de 1960 (véase Bohannan, en Nader [1969: 401-418]).

Muchos años después, Geertz ofreció un argumento similar, en el que tomaba "distancia" de Gluckman (Geertz, 1983: 169); sostenía que tres grandes tradiciones culturales —la islámica, la india y la malaya— tenían "sensibilidades" jurídicas diferentes. Intentó demostrarlo eligiendo y comparando dos conceptos centrales de cada tradición. Optó por traducir estos pares de conceptos "de hecho y de derecho". Pero, por supuesto, en cada una de las tres tradiciones el ámbito de referencia de estos conceptos no era el mismo. El resultado fue un *tour de force* en parte porque Geertz utilizó "de hecho y de derecho" como traducción para los tres, y porque definió *hecho* como "lo que es verdad" y *ley* como "lo que es correcto". Este no es el significado de la distinción entre hecho y derecho en el derecho angloamericano, pero la reformulación de Geertz en términos filosóficos y morales no es accidental. No estaba interesado en cuestiones convencionales del derecho comparado, sino quería situar estos términos dentro de un gran esquema de pensamiento cultural. Sostuvo (1983: 232), en una frase ahora muy citada, que el derecho es "una especie de imaginario social" y que las comparaciones debían establecerse en ese sentido. Afirma (1983: 232) que "el derecho trata del significado, no de la maquinaria". Veía el derecho comparado como una oportunidad para comprender la diferencia cultural, siendo el análisis de la diferencia cultural el objetivo central del trabajo antropológico (1983: 233). Hasta aquí las ideas de Gluckman.

El énfasis que Bohannan y Geertz dieron a la importancia de la diferencia cultural precedió a la actual política de identidad, pero sin duda su planteamiento resuena en muchas versiones actuales del multiculturalismo, así como con las ideas de Taylor (1992) sobre la importancia de una política de reconocimiento. Hoy en día, la diferencia cultural es una reivindicación de las políticas sectoriales en muchas partes del mundo. No es de extrañar que la cultura como origen de la forma jurídica continúe siendo

una propuesta vigente (Greenhouse y Kheshti, 1998). Sirve para quienes tienen sus propias razones políticas para subrayar los límites colectivos y para distinguirse de los demás.

Rosen ha generado otra versión de la noción del "derecho como cultura". Abogado y antropólogo, fue alumno de Geertz y adoptó gran parte de la perspectiva geertziana en su trabajo. Ha escrito sobre el tribunal de un pueblo islámico de Marruecos responsable en gran medida del derecho familiar; el órgano jurisdiccional que estudió estaba restringido por ley a tales asuntos. Se preocupa por demostrar que, a pesar de su falta de precedentes y registros, el tribunal no toma decisiones arbitrarias, no imparte lo que Weber llamó "justicia kadi", aun cuando el juez tiene un gran poder discrecional (Rosen, 1980-1). Rosen (1989: 18) menciona: "La regularidad reside [...] en la articulación entre las decisiones del juez musulmán y los conceptos culturales y las relaciones sociales a las que están inextricablemente ligadas".

Otro ejemplo de "forma jurídica como producto cultural" es el esbozo que hace French del derecho tibetano entre 1940 y 1959, en un proyecto de reconstrucción histórica. Nombra su estudio como una "reconstrucción de la cosmología del derecho en el Tíbet budista en la primera mitad del siglo XX", caracterizando su esfuerzo como "un ejercicio de perspectiva e imaginación históricas" (1995: 17). Concluye que los juristas tibetanos no tomaban decisiones conforme a un conjunto de normas prescritas, sino que desarrollaban juicios discrecionales complejos. Abordaban cada caso como una combinación única de peculiaridades, una percepción que atribuye a la filosofía budista, a una forma de pensar sobre la "particularidad radical" (1995: 343).

El vínculo entre un sistema de resoluciones caso por caso y el trasfondo budista parece menos claro cuando se comparan materiales. Después de todo, hay muchas sociedades y entornos institucionales donde instancias de audiencia no budistas deciden caso por caso y destacan la singularidad de la situación, como el tribunal islámico descrito por Rosen. Las disposiciones institucionales descentralizadas parecen ser el meollo de la cuestión. ¿Se trata de consecuencias de concepciones religiosas-filosóficas o de la historia socioestructural?

Esto nos lleva a cuestiones derivadas de la construcción weberiana de la racionalidad jurídica en el Occidente moderno. ¿Hasta qué punto las decisiones de jueces occidentales se rigen de hecho por normas imperativas, y cuánto se debe a la discreción jurídica? Posner ofrece algunas respuestas estadounidenses maravillosamente sinceras. Posner es el eminente fundador del movimiento de derecho y economía, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago y comentarista ocasional de antropología jurídica, que actualmente es juez del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos. Aunque no todos los jueces admitirían, como hace Posner (1998: 235) (y el juez Holmes), que utilizan una prueba de "vómito" de asco como forma de decidir cuándo hacer uso del propio criterio en lugar de aplicar las normas existentes, el reconocimiento de sus propias reacciones y de la importancia de la discreción jurídica no es nuevo ni revolucionario en el derecho estadounidense.

No obstante, con excepción de Rosen (1980-1), los antropólogos jurídicos por lo regular han prestado poca atención a la discrecionalidad jurídica tanto en los sistemas occidentales como en los no occidentales. Por supuesto, la discrecionalidad puede ser difícil de detectar si se enmascara con una alusión a las normas. Asimismo, reconocer la importancia de la discrecionalidad debilita un análisis puramente cultural. La lógica de resolución de problemas de la forma legal es congruente con el uso de la discrecionalidad, pero invita a preguntarse: ¿en interés de quién se toman las decisiones? ¿Dónde queda el estado de derecho cuando los jueces pueden decidir a su antojo? Aquí tenemos un ejemplo de cómo los tres modos de explicar la forma jurídica mencionados al principio de este artículo pueden entrelazarse de forma contradictoria en el intento de explicar el pensamiento jurídico.

Formas de utilizar el derecho: intereses y estrategias de los litigantes

Desde los años sesenta y setenta, los antropólogos cada vez tienden menos a considerar el comportamiento como resultado de patrones culturales y normas sociales preexistentes. Incluso en la concepción marxista de Bourdieu sobre la reproducción social, la idea del "habitus" (1977: 78) debe tomar en cuenta la improvisación y la invención.

El vínculo entre el incipiente interés antropológico por la elección y el cambio y el contexto sociopolítico de los años sesenta y setenta es difícil de demostrar, pero imposible de ignorar. El reto a la autoridad era característica destacada de la vida pública, que repercutió sustancialmente en las universidades. Con el fin de la dominación colonial en los años sesenta, los pueblos antes colonizados eran, al menos formal y legalmente, dueños de sí mismos. Los reclamos sobre el pasado colonial se expresaron de forma abierta. En Estados Unidos, la guerra de Vietnam suscitó una gran resistencia popular, con consecuencias legales para los manifestantes. Se puso en marcha el movimiento por los derechos civiles. Se exigieron cambios legislativos y sociales y se inició una larga lucha. El movimiento feminista comenzó su tarea de concienciación en un entorno donde nuevos métodos para la anticoncepción modificaban el comportamiento sexual, la conciencia moral y muchas leyes ligadas al género. En Europa se produjeron tormentas sociales similares.

En vista de toda la efervescencia política del momento, no había gran cabida para una antropología del derecho centrada en el conformismo. La agencia cobró protagonismo. Los casos se escuchaban y leían en función de los motivos de los litigantes. El derecho se consideraba una representación del orden social, pero se entendía que podía utilizarse de formas muy diversas por personas que actuaban de acuerdo con su propio interés. Los fuertes y poderosos podían, por supuesto, promover sus intereses de modo más eficaz que los débiles.

Los primeros ejemplos de trabajos etnográficos que insinuaban algunos de estos cambios en la postura analítica hacia la justicia normativa aparecen en los escritos de Gulliver (1963; 1969). En su trabajo de campo entre los arusha, en la Tanganica colonial, observó que a menudo gestionaban sus disputas legales sin acudir a los tribunales nativos (coloniales) existentes, sino mediante un sistema de negociación de acuerdos "informales", no oficiales. Los representantes del linaje de las partes en disputa se reunían y negociaban soluciones en nombre de los demandantes. Concluyó que los ganadores de estos acuerdos negociados eran siempre las partes políticamente más poderosas. El discurso utilizado en estas negociaciones hacía referencia a las normas, pero él sostenía que estas no determinaban

el resultado. Contrastó este proceso de negociación con las decisiones judiciales, donde asumió que el resultado estaba determinado de modo normativo. De esta forma, continuaba asumiendo no sólo la existencia de un sistema normativo, sino que este se aplicaba sistemáticamente en tribunales formales.

El escenario analítico cambió aún más en dirección a la agencia algunos años más tarde. El derecho empezó a ser tratado como un conjunto de ideas, materiales e instituciones utilizados como recursos por personas que perseguían sus propios intereses. Por ejemplo, el trabajo etnográfico de Collier entre los mexicanos de habla maya trató las categorías y conceptos legales zinacantecos "como un conjunto de racionalizaciones aceptables para justificar la conducta" (Collier, 1973: 13). Su objetivo central era identificar cómo los zinacantecos concebían el mundo y su manejo de las transacciones y disputas en función de estas ideas. Sin embargo, Collier también dejó claro que el mundo zinacanteco estaba lejos de ser autónomo y abstraído por completo de las intervenciones de las instituciones del Estado mexicano. Collier demostró que el sistema jurídico zinacanteco no era estático ni estaba aislado del mundo exterior.

El desafío que los trabajos tempranos de Gulliver plantearon a Gluckman sobre si el poder o las normas determinaban el resultado de las disputas persistió en Inglaterra durante un tiempo. Una conferencia de la Asociación de Antropólogos Sociales incluso abordó este tema (Hamnett, 1977). Comaroff y Roberts (1981) finalizaron en definitiva este debate en la ASA y respaldaron su argumento con material empírico convincente y con la publicación de un libro muy conocido y leído que sostenía que, incluso en los tribunales judiciales, no siempre imperaban las normas. Utilizando material de casos recopilados entre los tswanas del sur de África, mostraron que dentro de un mismo sistema podían existir varias formas para tramitar litigios. Las normas y las relaciones sociales de los litigantes, así como sus intereses, formaban parte del mismo universo de litigación. Los casos demostraron que los tswanas a menudo aprovechaban las arenas del litigio para renegociar sus posiciones personales, para obtener el reconocimiento de las relaciones sociales que estaban en disputa (1981: 115). Este tipo de confrontación se producía como si fuera

una discusión sobre normas: el lenguaje en el que se presentaban los argumentos estaba "culturalmente inscrito y normativamente codificado" (1981: 201). Los autores hablan de un "dualismo en la concepción tswana del mundo, donde la vida social se describe como gobernada por normas, pero muy negociable, regulada por la norma pero pragmáticamente individualista" (1981: 215):

> Las disputas oscilan entre lo que en apariencia son casos "legales" regidos por normas y otros que parecen ser enfrentamientos "políticos" motivados por intereses [...] La cuestión, sin embargo, no es tan solo que estos diferentes modos coexistan en cierto contexto [...] sino que están sistemáticamente relacionados [...] siendo transformaciones de una única lógica (1981: 244).

¿Este arreglo de ideas contradictorias es especial de los tswana o más general? Yo diría que esta situación es habitual. En concordancia con este punto de vista, en varias ocasiones durante la década de los setenta sostuve que la sociología de la causalidad era desatendida por un modelo de conformidad-desacuerdo sobre el papel de las normas de derecho en las sociedades, como si hubiera un único conjunto de normas, definidas con claridad, totalmente discretas y sin contradicciones ni ambigüedades (Moore, 1970; 1973; 1975a; 1975b; 1978). La realidad social es una mezcla peculiar de acciones congruentes con las normas (y puede haber numerosas normas en conflicto o que compiten entre sí) y otras que son elegidas, discrecionales, manipuladoras" (1978: 3). También es relevante destacar que la elección y la manipulación no solo las llevan a cabo los litigantes en situaciones de disputa, sino también las autoridades de quienes depende el resultado, con referencia a normas e ideologías normativas de otros contextos.

La referencia a normas o ideologías con implicaciones normativas suelen caracterizar el comportamiento de las autoridades dentro y fuera de los contextos de litigio. El lugar que ocupan las declaraciones moralizantes de las autoridades y de los líderes es algo tan importante para el análisis de la relación entre las normas jurídicas y el comportamiento como lo es la comprensión de las maniobras de los litigantes. La organización de la autoridad y su relación con la representación de las ideas normativas

es una pieza fundamental del enfoque, la presentación y la aplicación (o no aplicación) del derecho. Al centrarse en los litigios, los antropólogos han obtenido cierta comprensión sobre el conjunto de ideas normativas, pero aquello que las autoridades y otros involucrados hacen con ellas es realmente otra cosa.

Cuestionar la autoridad: cuestiones de clase y dominación en la interpretación de la ley

Dada su falta de conocimientos jurídicos doctrinales y técnicos, con frecuencia se asume que los antropólogos que estudian las sociedades industriales son mejores observando procesos jurídicos "informales" análogos a los que se dan en las comunidades pequeñas: negociación y mediación, instituciones informales como tribunales de pequeñas reclamaciones, acuerdos entre vecinos generados internamente, derecho familiar y similares. Varios antropólogos han realizado con éxito trabajos de campo y análisis de casos en este tipo de entornos. Estos contribuyen a nuestra comprensión de cuestiones sociales y culturales distintas de las que ocurren en entornos más formales: actitudes populares sobre los litigios y las instituciones jurídicas, concepciones del derecho como parte de la cultura de la comunidad, prácticas reales de los funcionarios en su interacción con las personas, etc. (Abel, 1982; Conley y O'Barr, 1990; Greenhouse, 1986; Greenhouse *et al*., 1994; Merry, 1990; Yngvesson, 1993; Yngvesson y Hennessey, 1974).

Sin embargo, en la década de 1970, una curiosa demostración del agrado antropológico por las instituciones informales ocurrió cuando el sistema judicial estadounidense acogió oficialmente la informalidad. Cuando los tribunales añadieron la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) a las opciones disponibles para los litigantes, a los antropólogos no les agradó. La RAC se difundió como una respuesta a las necesidades de los pobres y de quienes tenían demandas menores que, de otro modo, habrían sido desatendidas[4]. Pero, en realidad, el poder judicial admitió el programa

4 En el mismo periodo, se llevó a cabo una importante encuesta internacional para examinar el problema general del acceso a las instituciones jurídicas (Cappelletti y Garth 1978-9; Cappelletti y Tallon 1973). En muchos países se buscaron alternativas a los tribunales.

porque sus calendarios judiciales estaban sobrecargados. De forma desafortunada, algunos jueces señalaron que querían sacar los "casos basura" de sus tribunales (Nader, 1992: 468).

Nader, apasionada por el interés público (Nader, 1999), sostenía que, de hecho, los propios tribunales deberían ser más accesibles para los pobres. Ella (1980: 101) afirmaba que la legitimidad del sistema jurídico en una democracia depende de que todos tengan acceso a los tribunales. Esto coincidía con su trabajo anterior sobre la resolución de conflictos en dos pueblos rurales zapotecas de México, trabajo que comenzó en la década de los cincuenta (Nader, 1990). Cuando Nader inició este proyecto, en estos pueblos no había abogados, y el cargo de juez se rotaba entre los hombres de mayor edad, cada uno de ellos cumplía un mandato fijo. Evidentemente, los jueces se veían a sí mismos como mediadores que intentaban encontrar soluciones conciliatorias entre las personas en conflicto. Nader describió su experiencia en México cuando ofrecía conferencias en facultades de derecho de Estados Unidos, y reclamó a su público que no intentaran ofrecer formas de conciliación menos costosas y soluciones más accesibles para los problemas cotidianos habituales en Estados Unidos. Desde el principio, utilizó su trabajo etnográfico para comentar las deficiencias que consideraba existían en la sociedad estadounidense.

Pero cuando muchas jurisdicciones establecieron realmente la RCA, la reacción de Nader fue negativa. Sostuvo que el problema residía en qué era justo y qué injusto según la ley, y no si las personas podían ser obligadas a ceder en espacios de mediación como si estuvieran en una especie de terapia. Nader (1993: 4) se preguntaba qué significaba esta "ideología de la armonía" coercitiva en relación con las inequidades de la vida estadounidense. Aquí tenemos uno de los tres temas recurrentes sobre la forma jurídica mencionados con anterioridad, la representación de la ley al servicio de los intereses de la élite cuando en realidad debería resolver los problemas de ricos y pobres por igual. Nader (1992: 468) es clara sobre cómo esto se relaciona con la política de la época. "Cambiar la justicia por la armonía es una de las consecuencias no reconocidas de la década de 1960... En un esfuerzo por sofocar los movimientos por los derechos (derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los consumidores,

derechos medioambientales) y calmar a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, la armonía se convirtió en una virtud ensalzada por encima de las quejas, las disputas o los conflictos".

Otros críticos del movimiento RCA también argumentaron que tales medidas reducían el conflicto social que podría reformar la sociedad (por ejemplo, Abel, 1982). Esto me parece un gran salto interpretativo y no del todo justificado, pero para algunos parecía cierto. Así, Merry (1990: 9) habla también de la mediatización como "un proceso de dominación cultural ejercido por la ley sobre las personas que presentan sus problemas personales a los tribunales inferiores". Pero, en su trabajo de campo, los numerosos problemas individuales llevados a mediación suelen estar sólo tangencialmente relacionados con la clase social; de hecho, parecen ser el tipo de agravios personales entre individuos que se conocen bien y que pueden ocurrir en cualquier clase, disputas entre vecinos, esposos y esposas, padres e hijos.

Lo que claramente puede atribuirse a la clase social es el hecho de que los habitantes de Merry se encuentren en un proceso público de mediación, en lugar de recurrir a abogados privados que negocien por ellos. En los entornos de mediación se someten a una dosis considerable de consejos condescendientes, a menudo psicológicos. Pero la pregunta que queda en el aire es si esto tiene mucho que ver con una "ideología de la armonía" que mantiene a raya los grandes enfrentamientos sociales.

Nader también aplica su tesis de la "ideología de la armonía" a su trabajo sobre disputas en un pueblo mexicano zapoteca de las montañas. Su visión actual sobre la historia del pueblo es que la gente se presentaba a sí misma como capaz de resolver todas las disputas de forma armoniosa como parte de una estrategia política para evitar que las autoridades coloniales se entrometieron en los asuntos de la comunidad (1990: 310). Explica que la ideología de la armonía era el precio que debían pagar por la "autonomía y autodeterminación" de la aldea (1990: 321).

Los trabajos de Nader, Merry y Abel ilustran cómo algunas personas establecieron una analogía entre la situación de los pueblos colonizados y los pobres de los países industrializados. En otras obras, la situación de las mujeres en situaciones de desigualdad de género, a menudo en contextos

excoloniales, se enmarca de forma indirecta en el mismo modelo. Lo que motiva a estos autores es la idea de que la ley debería significar igualdad de derechos y de trato para todos. Obviamente, a menudo esto no es así, ya sea por falta de acceso, parcialidad judicial u otros obstáculos (Griffiths, 1997; Hirsch, 1998). Así, para algunos antropólogos, el tema de la dominación y la resistencia surge como el elemento principal de su interpretación del derecho, y sus escritos señalan las grandes protestas y revueltas sociales latentes que están a la espera de producirse. Pero esto acaso representa una gran exageración, y tiene poco que ver con las disputas domésticas, las peleas entre vecinos, las discusiones entre propietarios e inquilinos y las quejas de los consumidores.

Quizá existe mucho resentimiento en estas disputas, pero ¿constituyen una movilización potencial para la reforma social? Parece evidente que un modelo de dominación-resistencia sin matices es un marco demasiado simplista para captar la diversidad de formas de control y de origen de los movimientos sociales. Hirsch (1994; 1998) y Griffiths (1997), preocupados por el género, ilustran las complejidades que revelan estudios detallados, y muestran una diferencia considerable entre utilizar la idea de resistencia, por un lado, y en atribuir resistencia en críticas más generalizadas de la dominación, por otro.

La complejidad que entraña analizar cómo la ley, la economía y el cambio sociopolítico están interconectados es en particular evidente en estudios históricos longitudinales. Algunos trabajos antropológicos han combinado material histórico-jurídico detallado con trabajo de campo etnográfico. En la década de los ochenta, Snyder (1981b) escribió un recuento marxista sobre el capitalismo y el cambio jurídico entre los diola de Senegal, y Gordon y Meggitt (1985) delinearon los cambios en la autoridad del gobierno en Nueva Guinea desde la época colonial. Durante la primera oleada de estudios etnográfico-históricos sobre el derecho, escribí un estudio etnográfico-histórico de los habitantes del Kilimanjaro entre 1880 y 1980 (Moore, 1986b). En este entrelazo las historias de vida y las disputas legales de individuos vivos (y la del linaje de sus ancestros), que muestran sus propias experiencias con el registro documental del cambio económico, demográfico e institucional a gran escala.

Unos años después de que Nader publicara su estudio histórico sobre los zapotecos, Lazarus- Black (1994) analizó el funcionamiento de los tribunales en Antigua y Barbuda que se ocupaban de asuntos relativos a la esclavitud. Muestra cómo la ley se usaba para restringir a los esclavos y proteger a los esclavistas, pero también cómo los esclavos podían, en ciertas ocasiones, hacer uso de los tribunales en su propio beneficio. Más recientemente, los Comaroff han incluido algunas observaciones sobre el derecho a lo largo de la historia de sus prácticas misioneras y coloniales en África meridional y central. Su abordaje general a la historia se resume en la idea de que "la colonización europea de África fue con frecuencia no tanto una conquista practicada a través de la coerción directa, sino más bien un intento persuasivo de colonizar la conciencia, de rehacer a la gente redefiniendo los aspectos cotidianos de la vida que se dan por sentados" (Comaroff y Comaroff, 1991: 313). Algunas ideas básicas del derecho inglés son inconsistentes con el mundo de la vida indígena y se convierten en instrumentos de la colonización de conciencias. Estos autores destacan cómo las ideas de propiedad privada, el individualismo posesivo, el matrimonio legítimo y otras nociones jurídicas sirven al propósito de transformar la manera en que los africanos pensaban sobre el mundo en que vivían (Comaroff y Comaroff, 1997: 366-404; véase también Comaroff, 1995).

Las particularidades históricas de cada una de las experiencias coloniales estudiadas en las obras mencionadas difieren enormemente. Cada región participó de forma distinta en la economía mundial (o quedó al margen de ella) y fue colonizada de una manera diferente. Cada una tenía una conformación social y cultural diferentes, que se modificó con el tiempo, tanto antes como después de la colonización. No es de extrañar que el origen europeo compartido por los colonizadores diera a los colonizados un acervo de ideas jurídicas similares. Lo que llama la atención es la notable variación en cómo estas ideas fueron recibidas y utilizadas por las poblaciones dominadas (para una reconsideración de algunas cuestiones histórico-jurídicas, véase Moore [1989a]; Roberts y Mann [1991]; Starr y Collier [1989]).

Pluralismo jurídico: desmontar las piezas móviles del Estado

El concepto de Estado como entidad unificada se ha revisado de forma amplia en el último medio siglo. El pluralismo cultural y las divisiones políticas se reconocen desde hace tiempo como características básicas y duraderas de muchos sistemas políticos (Furnivall, 1948; Smith, 1965); los Gobiernos que tratan con colectivos culturalmente distintos reconocen a menudo tales diferencias en términos jurídicos (Hooker, 1975). Durante el periodo temprano de independencia, en la década de los sesenta, el legado del pluralismo colonial tuvo un lugar destacado en el debate intelectual (por ejemplo, Kuper y Smith, 1969; Moore, 1989b).[5] Se discutía mucho si los nuevos Estados independientes de África lograrían convertirse en naciones unificadas, dado que estaban internamente divididos y tenían una historia de Gobiernos coloniales que a menudo reforzaban las fronteras entre grupos étnicos.

Que el pluralismo étnico y racial planteaba otro tipo de cuestiones políticas, constitucionales y jurídicas era evidente no sólo en África, sino en otros lugares (Kuper y Smith, 1969: 438-40). Estos asuntos auguraban problemas, y Maybury-Lewis (1984) los abordó preguntándose cuáles podrían ser las consecuencias políticas de las políticas oficiales basadas en la etnicidad.[6] Los acontecimientos recientes de los Balcanes ofrecen una respuesta sombría. En este tipo de literatura política, el término *pluralismo* se utiliza de forma repetida para referirse a sociedades que incorporan una diversidad de colectivos institucionalmente distintos. Así lo utiliza, por ejemplo, Tambiah (1996) en su libro sobre la violencia étnica en Asia.

Pero en la antropología jurídica actual, el "pluralismo", o, para ser más precisos, el "pluralismo jurídico", tiene con frecuencia un sentido diferente

5 En la antropología existía una concepción anterior, no étnica, de los múltiples lugares donde podría generarse el derecho: la teoría de los niveles jurídicos de Pospisil. Postulaba que cada subgrupo social tenía su propia "ley" interna, y aludía a grupos como familias, clanes y comunidades. Pospisil (1971: 273) dijo: "Tenemos que preguntarnos si una sociedad dada tiene un único sistema jurídico consistente [...] o si hay varios sistemas de este tipo".

6 Véase Moore (1989b) sobre la producción del pluralismo como proceso; Greenhouse (1996) sobre democracia y etnografía.

en su totalidad. Un uso relativamente nuevo se encuentra en un artículo de Griffiths (1986: 3), que critica el "centralismo jurídico", la idea de que el derecho es "un orden jerárquico exclusivo, sistemático y unificado de las proposiciones normativas" que emana del Estado. Resulta difícil pensar qué científico social apoyaría hoy en día tal afirmación, pero es un buen comienzo para su argumentación. Griffiths afirma que en cualquier sitio la realidad jurídica es un *collage* de prácticas y normas obligatorias que emanan tanto de fuentes gubernamentales como no gubernamentales. Este autor (1986: 39) considera que "todo control social es más o menos legal". Todo el dispositivo normativo, sea cual sea su procedencia, es lo que se denomina "pluralismo legal".

En 1988, poco después de la publicación del artículo de Griffiths, se celebró un simposio sobre "Pluralismo jurídico en las sociedades industrializadas", y Merry (1988: 879) revisó y publicó el artículo de Griffiths en un texto muy citado que sintetizaba la literatura (Greenhouse y Strijbosch, 1993; Teubner, 1992). Siguiendo a Griffiths, algunos autores hoy consideran que el pluralismo jurídico se refiere al conjunto de normas gubernamentales y no gubernamentales de control social, sin hacer distinciones sobre su origen.

Sin embargo, para ciertos propósitos este conjunto debe desagregarse. Tanto por razones analíticas como políticas, es necesario establecer distinciones que identifiquen la procedencia de las normas y controles (Moore, 1973; 1978; 1998; 1999; 2000). Negar que el Estado para muchos fines prácticos puede y debe distinguirse de otras entidades normativas y de control es ignorar lo obvio. Y si uno quiere iniciar o seguir el cambio, no solo es útil analíticamente, sino que constituye una necesidad práctica identificar los lugares concretos de donde emanan las normas y reglas imperativas. Elaborar tales distinciones no implica necesariamente adoptar un punto de vista " jurídico centralista".[7]

Es claro que gran parte del debate alrededor del pluralismo jurídico no es solo una discusión sobre palabras, sino que a menudo es un debate sobre la

7 Véase Moore (1973) sobre los campos sociales semiautónomos, un artículo en el que Griffiths se inspiró y que cita con aprobación.

situación actual del Estado, un debate que se pregunta dónde reside realmente el poder. El discurso sobre este tema se mezcla con argumentos sobre las transformaciones actuales del Estado, dado el empoderamiento de entidades colectivas subnacionales, a través de fenómenos trasnacionales y de la "globalización". En la actualidad, el "pluralismo" puede referirse a: (1) la forma en que el Estado reconoce los diversos ámbitos sociales dentro de la sociedad y se representa a sí mismo ideológica y organizativamente en relación con ellos; (2) la diversidad interna de la administración del Estado, las múltiples direcciones en que sus subcomponentes oficiales disputan y compiten por la autoridad legal; (3) las formas en que el propio Estado compite con otros Estados en ámbitos más amplios (la UE, por ejemplo), y con el resto del mundo; (4) el modo en que el Estado está interrelacionado (interna y externamente) con campos sociales no gubernamentales y semiautónomos que generan sus propias normas obligatorias (no jurídicas) y a cuyo cumplimiento pueden inducir o coaccionar (véase la nota 6); (5) los modos en que el derecho depende de la colaboración de campos sociales más allá del Estado para su aplicación, etcétera.

Wilson (2000) ha construido una defensa etnográfica convincente sobre la idoneidad de una visión compleja del pluralismo jurídico en su análisis de los derechos humanos en Sudáfrica. Muestra la coexistencia de diversas ideas de justicia, así como los procedimientos y representaciones mediante las cuales estas ideas contradictorias, que emanan de diferentes fuentes, se dan en la práctica, desde la reconciliación hasta en las golpizas públicas. El suyo es un retrato sutil y complejo, basado en la historia y la etnografía, de las luchas implícitas en el pluralismo jurídico.

Sobre los obstáculos de la democracia: tres trabajos muy recientes

En la actualidad, los antropólogos parten de su interés por lo jurídico para involucrarse en cuestiones políticas, abordándolas más directamente que nunca. Y no es de extrañar: los años ochenta y noventa han sido testigos de una gran agitación política como los veinte años anteriores. Vivimos un periodo postsocialista, posterior a la Guerra Fría y al *apartheid*, en el que

muchos Gobiernos han sido derrocados y sustituidos. Se plantean preguntas sobre los nuevos regímenes y sobre si son o serán "democracias", y sobre lo que significa "democracia". La construcción de nuevos regímenes y la reformulación de los antiguos suceden en muchas partes del mundo. Las dimensiones jurídicas de estos procesos comienzan a atraer nuevas formas de atención antropológica. Sin embargo, la construcción de gobiernos nacionales no es un proceso que pueda separarse de los asuntos transnacionales. Las preocupaciones globales entran inevitablemente en el debate.

El debate académico que rodea estas cuestiones es tenso, pero comienza a considerar el contexto a gran escala de formas novedosas. Esto puede ilustrarse con tres acercamientos antropológicos sorprendentemente diferentes del ámbito jurídico, todos ellos publicados en los dos últimos años y relacionados con los derechos civiles. Describiré de forma muy breve los libros para mostrar cómo el campo de la antropología jurídica está hoy en día dando voz a nuevas formas de expresión política directa. Teóricamente, los tres se relacionan con la idea de democracia y qué hacer con ella. Los tres analizan acontecimientos jurídicos dentro del contexto de la comunicación de masas en un mundo concebido globalmente.

Comienzo con Coombe (1998), quien se ocupa del derecho de marcas. Coombe es tanto abogada como antropóloga, y en su trabajo "las marcas registradas, los indicios protegidos de personajes célebres y las marcas de autoridad gubernamental" (1998: 286) dan lugar a un conjunto de ensayos muy interesantes y a menudo divertidos sobre los símbolos en los medios de comunicación masiva y la vida cultural de la propiedad intelectual. El logotipo de Coca-Cola, la imagen de Marilyn Monroe y ciertas insignias de agencias gubernamentales son reconocidos por todo el mundo, pero no todos pueden ser utilizados de forma libre.

Coombe sostiene que nuestro entorno está repleto de estos símbolos manufacturados. La creación de demanda por medio de anuncios de mercancías y la publicidad de celebridades llena nuestro entorno y atiborra nuestra conciencia. Afirma que "estas imágenes impregnan de tal manera todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana que son constitutivas de las 'culturas' en las que vive la mayoría de los habitantes de las sociedades

occidentales" (1998: 52). Y tiene razón. Ocupan nuestro pensamiento nativo y nuestro mundo natural. Este repertorio de imágenes y nombres se extiende al resto del mundo por medio de la comunicación de masas. Batman vive en Nueva York, Hong Kong y Dakar.

El corazón de Coombe está obviamente con quienes utilizan estos símbolos de modo ilegal para ridiculizarlos (1998: 271). Sostiene que, dado que los símbolos son omnipresentes, las "prácticas de apropiación o "recodificación" de formas culturales constituye la esencia de la cultura popular" (1998: 57, véase también 285). De hecho, nos pide que prestemos más atención a nuestro entorno simbólico comercialmente construido y a quién lo posee y controla su contenido y difusión. La capacidad de expresión, argumenta (1998: 186 y 194), no debería restringirse a fin de permitir la construcción de una democracia dialógica. Me pregunto si restringir la libertad de copiar los arcos dorados que son la marca registrada de McDonald's interfiere directamente con el diálogo democrático, pero eso no demerita muchas otras ideas de Coombe sobre cómo nuestro entorno simbólico está infestado de marcas registradas y sobre su control comercial. Es evidente que la comunicación no es del todo libre cuando nuestro vocabulario simbólico se constituye bajo estas condiciones.

El segundo libro es una colección de ensayos editada por Wilson, que presenta una serie de estudios sobre situaciones relativas a los derechos humanos, inclusive algunas de persecución extrema. Wilson (1997: 13) describe la colección de ensayos como "una indagación sobre cómo los discursos normativos basados en los derechos se producen, traducen y materializan en diversos contextos". Cada capítulo enfrenta "la tensión entre las formulaciones globales y locales de los derechos humanos" (1997: 23). Los autores se interesan por cómo las luchas en un campo de acción local están "estructuradas por discursos y prácticas transnacionales" (1997: 24). Estas son, por supuesto, muy diversas, al igual que las situaciones descritas.

El trabajo de campo relacionado con los derechos humanos se lleva a cabo, por definición, en un escenario de información y representaciones contradictorias, a menudo en momentos terribles de crisis. ¿Qué puede aportar la antropología a lo que otras disciplinas pueden decir sobre estas

cuestiones? La colección de Wilson discute con franqueza aquello que los antropólogos pueden y no pueden hacer, y esto es parte de su valor. Los autores reconocen los límites de la competencia antropológica. Evidentemente, la problemática que abordan los autores va más allá de los conocimientos acumulados por una sola profesión, más allá de un lugar y, con frecuencia, más allá de un momento en el tiempo. Ahora los antropólogos se enfrentan al derecho internacional, a las relaciones políticas trasnacionales, a las secuelas de la persecución política nacional y a cómo se informa sobre los acontecimientos en estos ámbitos.

El tercer libro de Borneman (1997) incorpora precisamente ese material. Describe las demandas públicas de justicia que se realizaron después de la caída del Muro de Berlín y el inicio de la unificación alemana. Los alemanes orientales que habían sido denunciados o sufrido otros agravios bajo el Gobierno socialista exigían que se repararan los agravios, y que se encontraran medios para restablecer la dignidad, sus nombres o la reputación perdida. También hubo demandas para procesar a los miembros de la elite de Alemania Oriental y para que devolvieran o redistribuyeran las propiedades. Se instalaron varias vías institucionales para satisfacer estas demandas, y Borneman realizó trabajo de campo sobre algunas de ellas.

Borneman describe el enjuiciamiento de un importante abogado, intermediario entre Alemania Oriental y Occidental en la época del Muro, un caso que plantea la cuestión del problema de la criminalización *a posteriori* de actos que cuando se realizaron eran legítimos. También nos habla de las audiencias llevadas a cabo dentro de la industria de la radio y la televisión para tratar los agravios sociales allí experimentados. Borneman (1997: 99) sostiene que todos estos procedimientos fueron (y son, pues aún no han terminado) esfuerzos por instituir al Estado como un agente moral. El nuevo Estado intentó desvincularse de los crímenes del pasado. Para el Estado, el reconocimiento de las injusticias era tanto un acto práctico de reparación como un acto simbólico de purificación ritual. Borneman destaca la importancia del reconocimiento del sufrimiento por parte de los funcionarios, y sostiene que dicho reconocimiento señala una revaloración de la naturaleza del ciudadano. El sufrimiento se reincorpora "a la identidad del sujeto nacional" (1997: 134).

Concluye resumiendo datos de otros países de Europa Central y Oriental durante los primeros cuatro años tras los cambios de régimen. En líneas generales, su argumento a lo largo del libro es que la carencia de justicia retributiva conduce a ciclos de violencia retributiva y, lo que es aún más importante, que no hay democracia sin responsabilidad política y personal mediante la ley (1997: 3, 145, 165).

Estos tres libros parten de una antropología previa y más limitada. Todos tratan de principios políticos controvertidos, del derecho en acción y de cuestiones transnacionales. Todos adoptan posturas explícitas sobre los temas que abordan. Todos se ocupan, no de las encantadoras costumbres nativas, sino de las trágicas posibilidades que se vislumbran en los sitios del trabajo de campo.

Conclusión

Es evidente que en los últimos cincuenta años la antropología jurídica se ha saturado de declaraciones políticas. A mediados de siglo, el proyecto antropológico pretendía comprender la racionalidad de las prácticas jurídicas "indígenas" de pueblos no occidentales, la mayor parte bajo el dominio colonial. El derecho se abordaba como una técnica de gestión de conflictos, como un método local para la resolución de problemas, cuyo modo era producto de la cultura y la historia. Por obvias razones, durante aquella época el dominio colonial apenas era directamente cuestionado.

En el mundo poscolonial, las prácticas de los Gobiernos coloniales fueron atacadas como nunca. La atención se centró en las instituciones jurídicas y los Gobiernos occidentales, y el derecho tanto en las antiguas colonias como en Occidente se observó como una norma impuesta, a menudo con distorsiones sistemáticas (Abel, 1982; Burman y Harrell-Bond, 1979; Chanock, 1985 [1998]; Fallers, 1969; Galanter, 1989; Moore, 1986a; 1986b; Nader, 1980). Para algunos, la dominación y la resistencia eran la preocupación analítica. Pero, al mismo tiempo, los culturalistas continuaron con su propia forma de análisis jurídico, atendiendo a las variadas formas en que las personas concebían el mundo, a sí mismas y sus

situaciones, y continuaron suponiendo que estas concepciones culturales eran causales. En Estados Unidos este fue el periodo de la guerra de Vietnam, con las protestas que la acompañaron, del movimiento por los derechos civiles, del movimiento feminista y, sobre todo, de la Guerra Fría. No es de extrañar que se produjera una crítica antropológica de la autoridad legal. Y en el plano teórico, con la atribución de agencia al sujeto antropológico, la importancia de la acción y la elección modificó la visión anteriormente dominante sobre las reglas normativas como centro del análisis de las políticas culturales y jurídicas.

Surgió una definición amplia del control reglamentario. Se llegó a considerar que el control se ejercía en y por múltiples campos sociales. La percepción de que existían muchos puntos de control simultáneos redefinió el Estado como una entre muchas fuentes de mandatos obligatorios. Al debatir el concepto de campos sociales semiautónomos y la idea de pluralismo jurídico, la antropología jurídica redefinió su objeto y a sí misma.

¿Es posible identificar una nueva preocupación en la antropología jurídica actual? Tal y como lo mostré en los tres estudios que describí, esa preocupación consiste en producir una visión mucho más amplia del entorno político en donde el derecho está imbricado. Se revisan los datos jurídicos en busca de insumos y hechos en la actual turbulencia política global. Ya sea que hablemos del control sobre la propiedad intelectual del derecho, de la definición de los derechos humanos o de la responsabilidad de las personas por las políticas de regímenes, es evidente que nada es meramente local en su conformación ni en sus repercusiones.

En mi opinión, sus comentarios, directos e indirectos, sobre la posibilidad de implantar la democracia, son profundamente importantes e innovadores. Utilizan el trabajo de campo para mostrar las consecuencias políticas negativas de las acciones que han presenciado. Afirman que si continúa lo que describen, el discurso democrático abierto será inalcanzable, los derechos humanos serán pisoteados y los ciclos de violencia podrían repetirse.

Este enfoque es importante porque implica un uso nuevo y selectivo de la información recabada en el trabajo de campo para discutir sobre las

amplias unidades culturales y políticas que el trabajo de campo describe. En los agregados mixtos y variados que componen al Estado y a la escena global, este enfoque se concentra en elementos que constituyen creaciones jurídicas deliberadas. Los tres trabajos abordan el futuro potencial de esa dimensión intencionalmente construida.[8] Suponen un trabajo de campo de pequeña escala, pero discuten cuestiones a gran escala. Los dos niveles se aprovechan cuando el autor se pregunta si la información del trabajo de campo muestra la existencia de grandes obstáculos que dificultan la obtención de las libertades y responsabilidades que forman parte del ideal de la democracia liberal.

Estas obras se preguntan: "¿En qué clase de mundo ocurren realmente estos sucesos concretos? ¿Es posible la democracia? Utilizan el trabajo de campo sobre cuestiones jurídicas para identificar las prácticas jurídicas y no jurídicas que se interponen en este camino. En el proceso redefinen el alcance y la dirección de la inferencia antropológica. Se preguntan qué tipo de totalidad política podría dar cabida a aquello que describen.[9] Coombe, Wilson y Borneman se enfrentan directamente a la producción legal de consecuencias políticas. Así es como han enmarcado sus análisis.

No solo hablan de lo que está ocurriendo, sino de lo que podría ocurrir. Están dispuestos a considerar el ideal democrático, pero al mismo tiempo señalan lo lejos que está la gente de conseguirlo. Presentan su propio comentario crítico como una forma de acción social. Están interesados en cuestionar los efectos perjudiciales de muchas leyes e instituciones jurídicas. Pero también son conscientes de que en algunos países y en ciertas instituciones internacionales el derecho se utiliza con el propósito de reconstruir. Puede provocar desastres sociales, pero en algunas situaciones también puede ayudar a prevenirlos y repararlos.

---

8 He intentado abordar esta cuestión de diversas maneras en mis propios escritos recientes (por ejemplo, Moore, 1998, 1999 y uno de próxima publicación).

9 Estas preguntas que giran en torno a qué clase de mundo es este?; parafrasean el grito trágico y sardónico de Ken Saro Wiwa cuando lo llevaron a la horca para ahorcarlo, y el mecanismo falló, y lo trajeron de vuelta una y otra vez, y dijo: "¿Qué clase de país es este?". En esas palabras se encierra un comentario no solo sobre la incompetencia de los verdugos, sino sobre los jueces y los fiscales y el Estado nigeriano, todo el aparato que le condenó a muerte (véase Soyinka, 1996).

Cuando los antropólogos se preguntan en qué condiciones las instituciones jurídicas contribuyen a la práctica democrática, sin notarlo están mostrando pequeños signos de optimismo sobre las posibilidades de una acción intencionada. Estas preguntas muestran que incluso una profesión normalmente escéptica es capaz de reconocer que las cosas podrían ir mejor. Al menos, las situaciones podrían comprenderse mejor. Con este propósito, la antropología ha ampliado el alcance de su propio análisis académico contextualizando los materiales del campo jurídico de forma más amplia y profunda. Siempre hemos sabido que el derecho es un importante instrumento político y que tiene algo que decir sobre la forma en que la ley ha sido utilizada. No obstante, en las últimas décadas hemos ido más allá, aspirando a modificar la forma en que se concibe el derecho.

Referencias

Abel, R. (ed.). 1982. *The politics of informal justice*. 2 vols. Academic Press.

Benda Beckmann, F. von. 1979. *Property in social continuity*. The Martinus Nijhoff.

Benda Beckmann, K. von y F. von Benda Beckmann. 1985. Transformation and Change in Minangkabau. En L. Thomas y F. von Benda Beckmann (eds.). *Change and continuity in Minangkabau: local, regional, and historical perspectives on West Sumatra* (235-278). Ohio University Center for International Studies, Center for Southeast Asian Studies.

Benda Beckmann, K. von y F. von Benda Beckmann. 1994. Property, politics and conflict: Ambon and Minangkabau compared. *Law and Society Review*, *28*, 589-607.

Benda Beckmann, K. von, F. von Benda Beckmann y H. Spiertz. 1996. Water rights and policy. En J. Spiertz y M. Wiber (eds.). *The role of law in natural resource management* (77-99). Vuga.

Bohannan, P. 1957. *Justice and judgment among the Tiv*. Oxford University Press.

Borneman, J. 1997. *Settling accounts*. Princeton University Press.

Bourdieu, P. 1977. *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. 1987. "The force of law: toward a sociology of the juridical field". *Hastings Law Journal*, *38*, 814-853.

Bowen, J. y R. Petersen (eds.). 1999. *Critical comparisons in politics and culture*. Cambridge University Press.

Burman, S. y B. Harrell-Bond (eds.). 1979. *The imposition of law*. Academic Press.

Caplan, P. (ed.). 1995. *Understanding disputes*. Berg.

Cappelletti, M. y B. Garth (eds.). 1978-1979. *A world survey. Vol. 1, Access to justice*. Ed. gral. M. Cappelletti. Sijthoff & Nordhoff / A. Giuffre.

Cappelletti, M. y B. Garth (eds.). 1981. *Access to justice and the welfare state*. Sijthoff.

Cappelletti, M. y D. Tallon. 1973. *Fundamental guarantees of the parties in civil litigation*. Oceana.

Chanock, M. 1998. *Law, custom and social order*. Cambridge University Press. (Publicación original, 1985).

Collier, J. 1973. *Law and social change in Zinacantan*. Stanford University Press.

Collier, J. 1975. Legal processes. *Annual Review of Anthropology*, *4*, 121-144.

Colson, E. 1971. The impact of the colonial period on the definition of land rights. En V. Turner (ed.), *Profiles of change: African society and colonial rule* (193-215). En L. H. Gann (ed.), *Colonialism in Africa*, vol. 3. Cambridge University Press.

Comaroff, J. 1995. The discourse of rights in colonial South Africa: subjectivity, sovereignty, modernity. En A. Sarat y T. Kearns (eds.). *Identity, politics and rights* (193-236). University of Michigan Press.

Comaroff, J. y J. Comaroff. 1991. *Of revelation and revolution*. Chicago University Press.

Comaroff, J. y S. Roberts. 1981. *Rules and processes: the cultural logic of dispute in an African context*. Chicago University Press.

Conley, J. y W. O'Barr. 1990. *Rules versus relationships*. Chicago University Press.

Conley, J. y W. O'Barr. 1998. *Just words: law, language and power*. Chicago University Press.

Coombe, R. 1998. *The cultural life of intellectual properties*. Duke University Press.

Durkheim, E. 1961. *The elementary forms of the religious life*. Collier.

Fallers, L. 1969. *Law without precedent*. Aldine.

Fitzpatrick, P. 1992. *The mythology of modern law*. Routledge & Chapman Hall.

Fitzpatrick, P. y A. Hunt (eds.). 1987. *Critical legal studies*. Blackwell.

French, R. 1995. *The golden yoke: the legal cosmology of Buddhist Tibet*. Cornell University Press.

Furnivall, J. 1948. *Colonial policy and practice*. Cambridge University Press.

Galanter, M. 1989. *Law and society in modern India*. Oxford University Press.

Geertz, C. 1983. *Local knowledge: further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.

Gluckman, M. 1955. *The judicial process among the Barotse of Northern Rhodesia*. University Press for the Rhodes-Livingstone Institute.

Gluckman, M. 1965. *The ideas in Barotse jurisprudence*. Yale University Press.

Gluckman, M. (ed.). 1969. *Ideas and procedures in African customary law*. Oxford University Press for the International African Institute.

Gordon, R. y M. Meggitt. 1985. *Law and order in the New Guinea highlands*. University Press of New England.

Greenhouse, C. 1986. *Praying for justice*. Cornell University Press.

Greenhouse, C. 1996. *A moment's notice*. Cornell University Press.

Greenhouse, C. (ed.) y F. Strijbosch. 1993. *Legal Pluralism in Industrialized Societies. Journal of Legal Pluralism*, *33*, número especial.

Greenhouse, C. y R. Kheshti (eds.). 1998. *Democracy and ethnography*. State University of New York Press.

Greenhouse, C., B. Yngvesson y D. M. Engel (eds.). 1994. *Law and community in three American towns*. Cornell University Press.

Griffiths, A. 1997. *In the shadow of marriage: gender and justice in an African community*. Chicago University Press.

Griffiths, J. 1986. What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *24*, 1-55.

Gulliver, P. 1963. *Social control in an African society*. Boston University Press.

Gulliver, P. 1969. Introduction. En L. Nader (ed.). *Law in culture and society* (11-23). Aldine.

Gulliver, P. (ed.). 1978. *Cross-examinations: essays in memory of Max Gluckman*. E.J. Brill.

Habermas, J. 1979. *Communication and the evolution of society*. Beacon Press.

Hamnett, I. (ed.). 1977. *Social anthropology and law (ASA Monograph 14)*. Academic Press.

Hirsch, S. 1994. Kadhi's courts as complex sites of resistance: the state, Islam, and gender in post-colonial Kenya. En S. Hirsch y M. Lazarus-Black (eds.). *Contested states* (207-230). Routledge.

Hirsch, S. 1998. *Pronouncing and persevering: gender and the discourse of disputing in an African Islamic court*. Chicago University Press.

Hoebel, E. 1954. *The law of primitive man*. Harvard University Press.

Hooker, M. 1975. *Legal pluralism*. Oxford University Press.

Kelman, M. 1987. *A guide to critical legal studies*. Harvard University Press.

Kuper, L. y M. G. Smith (eds.). 1969. *Pluralism in Africa*. University of California Press.

Lazarus-Black, M. 1994. *Legitimate acts and illegal encounters: law and society in Antigua and Barbuda*. Smithsonian Institution Press.

Llewellyn, K. y E. Hoebel. 1941. *The Cheyenne way*. University of Oklahoma Press.

Low, D. 1996. *The egalitarian moment: Asia and Africa, 1950-1980*. Cambridge University Press.

Maybury-Lewis, D. (ed.). 1984. *The prospects for plural societies (proceedings of the American ethnological society, 1982)*. American Ethnological Society.

Merry, S. 1988. Legal pluralism. *Law and Society Review*, *22*, 869-896.

Merry, S. 1990. *Getting justice and getting even: legal consciousness among working-class Americans*. Chicago University Press.

Mertz, E. 1994. Legal language: pragmatics, poetics and social power. *Annual Review of Anthropology*, *23*, 435-455.

Moore, S. F. (en prensa). An international legal regime and the context of conditionality. En M. Likosky (ed.). *Transnational legal process*. Oxford University Press.

Moore, S. F. 1969. Law and anthropology. En B. Siegel (ed.). *Biennial Review of Anthropology* (52-300). Stanford University Press.

Moore, S. F. 1970. Politics, procedures and norms in changing Chagga law. *Africa*, (octubre), 321-344.

Moore, S. F. 1973. Law and social change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law and Society Review*, *7*, 719-746.

Moore, S. F. 1975a. Selection for failure in a small social field: Kilimanjaro, 1968-1969. En S. F. Moore y B. Myerhoff (eds.). *Symbol and politics in communal ideology* (109-143). Cornell University Press.

Moore, S. F. 1975b. Epilogue: uncertainties in situations: indeterminacies in culture. En S. F. Moore y B. Myerhoff (eds.). *Symbol and politics in communal ideology* (210-239). Cornell University Press.

Moore, S. F. 1978. *Law as process*. Routledge & Kegan Paul.

Moore, S. F. 1986a. Legal systems of the world: an introductory guide to classification, typological interpretations, and bibliographical resources. En L. Lipson y S. Wheeler (eds.). *Law and the social sciences* (pp. 11-62). Russell Sage Foundation for the Social Science Research Council.

Moore, S. F. 1986b. *Social facts and fabrications: 'customary' law on Kilimanjaro 1880-1980*. Cambridge University Press.

Moore, S. F. 1989a. History and the redefinition of custom on Kilimanjaro. En J. Starr y J. Collier (eds.). *History and power in the study of law* (277-301). Cornell University Press.

Moore, S. F. 1989b. The production of cultural pluralism as a process. *Public Culture*, *1*(2), 26-48.

Moore, S. F. 1990. *Harmony ideology: justice and control in a Zapotec mountain village*. Stanford University Press.

Moore, S. F. 1992. From legal processing to mind processing. *Family and Conciliation Courts Review*, *30*, 468-473.

Moore, S. F. 1993. Controlling processes in the practice of law: hierarchy and pacification in the movement to re-form dispute ideology. *The Ohio State Journal on Dispute Resolution*, *9*, 1-25.

Moore, S. F. 1998. Changing African land tenure: reflections on the incapacities of the state. *European Journal of Development Research*, *10*(2), 33-49.

Moore, S. F. 1999a. Systematic judicial and extra-judicial injustice: preparations for future accountability. En R. Werbner (ed.). *Memory and the postcolony: African anthropology and the critique of power* (126-51). Zed Books.

Moore, S. F. 1999b. Pushing the limits: eclecticism on purpose. *Political and Legal Anthropology Review*, *22*, 106-110.

Moore, S. F. y H. Todd (ed.). 1978. *The disputing process: disputing in ten societies*. Columbia University Press.

Moore, S.F. (ed.). 1980. *No access to law: alternatives to the American judicial system*. Academic Press.

Nader, L. (ed.). 1969. *Law in culture and society*. Aldine Press.

———.(ed.) 1980. No access to law: alternatives to the American judicial system. New York: Academic Press.

———.1990. Harmony ideology: justice and control in a Zapotec mountain village. Stanford: University Press.

——— 1992. From legal processing to mind processing. Family and Conciliation Courts Review 30, 468-73.

——— 1993. Controlling processes in the practice of law: hierarchy and pacification in the movement to re-form dispute ideology. The Ohio State Journal on Dispute Resolution 9, 1-25.

———.1999. Pushing the limits: eclecticism on purpose. Political and Legal Anthropology Review 22, 106-10.

——— (ed.) with H. Todd. 1978. The disputing process: disputing in ten societies. New York: Columbia University Press.

Newman, K. 1983. *Law and economic organization: a comparative study of preindustrial societies*. Cambridge University Press.

O'Barr, W. 1982. *Linguistic evidence: language, power and strategy in the courtroom*. Academic Press.

Peters, P. 1994. *Dividing the commons; politics, policy and culture in Botswana*. University Press of Virginia.

Posner, R. 1998. Pragmatic adjudication. En M. Dickstein (ed.). *The revival of pragmatism* (235-253). Duke University Press.

Pospisil, L. 1971. *Anthropology of law: a comparative theory*. Harper & Row.

Riles, A. 1999. Wigmore's treasure box: comparative law in the era of information. *Harvard International Law Journal*, *40*, 221-283.

Roberts, R. y K. Mann (eds.). 1991. *Law in colonial Africa*. Heinemann Educational.

Rosen, L. 1980-1981. Equity and discretion in a modern Islamic legal system. *Law and Society Review*, *15*, 217-245.

Rosen, L. 1989. *The anthropology of justice: law as culture in Islamic society*. Cambridge University Press.

Rouland, N. 1988. *Anthropologie juridique*. Presses Universitaires de France.

Smith, M. G. 1965. *The plural society in the British West Indies*. University of California Press.

Snyder, F. 1981a. Colonialism and legal form: the creation of customary law in Senegal. *Journal of Legal Pluralism*, *19*, 49-90.

Snyder, F. 1981b. *Capitalism and legal change*. Academic Press.

Soyinka, W. 1996. *The open sore of a continent*. Oxford University Press.

Starr, J. y J. Collier. 1989. *History and power in the study of law*. Cornell University Press.

Tambiah, S. J. 1996. *Leveling crowds*. University of California Press.

Taylor, C. 1992. *Multiculturalism and the politics of recognition*. Princeton University Press.

Teubner, G. 1992. The two faces of Janus: rethinking legal pluralism. *Cardozo Law Review*, *13*, 1443-1462.

Weber, M. 1978. *Economy and society*. University of California Press.

Werbner, R. 1984. The Manchester School in South Central Africa. *Annual Review of Anthropology*, *13*, 157-185.

Wilson, R. (ed.). 1997. *Human rights: culture and context*. Pluto Press.

Wilson, R. 2000. Reconciliation and revenge in post-apartheid South Africa. *Current Anthropology*, *41*, 75-98.

Yngvesson, B. 1993. *Virtuous citizens, disruptive subjects*. Routledge.

Yngvesson, B. y P. Hennessey. 1974-1975. Small claims, complex disputes. *Law and Society Review*, *9*, 219-274.

11. Espacializando los estados: hacia una etnografía de la gobernabilidad neoliberal[1]

James Ferguson y Akhil Gupta

Resumen: En este artículo exploratorio, nos preguntamos cómo llegan a entenderse los Estados como entidades con características espaciales particulares, y cómo las relaciones cambiantes entre las prácticas de gobierno y los territorios nacionales pueden estar desafiando los modos de espacialidad estatal establecidos desde hace mucho tiempo. En la primera parte de este artículo, tratamos de identificar dos principios clave de la especialización estatal: la verticalidad (el Estado está "por encima" de la sociedad) y el englobamiento (el Estado "abarca" o incluye sus localidades). Utilizamos evidencias etnográficas de un proyecto de salud materna en la India para ilustrar nuestro argumento de que las percepciones de verticalidad y englobamiento se producen mediante prácticas burocráticas rutinarias. En la segunda parte, desarrollamos un concepto de gobernabilidad transnacional para captar cómo las nuevas prácticas de gobierno y las nuevas formas de política de base pueden cuestionar principios de verticalidad y englobamiento que durante tanto tiempo han contribuido a legitimar y naturalizar la autoridad de los Estados sobre lo local.

Palabras clave: Estados, espacio, gobernabilidad, globalización, neoliberalismo, India, África.

En los últimos años se ha visto un nuevo nivel de preocupación antropológica por el Estado moderno. En parte, el nuevo interés por el Estado surge del reconocimiento del papel central que desempeñan los Estados en la configuración

1 Publicado originalmente en: James Ferguson y Akhil Gupta, 2002, "Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Governmentality", *American Ethnologist* 29(4): 981–1002.

de "comunidades locales" que históricamente han constituido los objetos de la investigación antropológica; en parte, esto refleja una nueva determinación de aportar una mirada etnográfica a las prácticas culturales de los propios Estados. Un tema importante que recorre la nueva literatura ha sido que los Estados no son simples aparatos burocráticos funcionales, sino poderosos lugares de producción simbólica y cultural que, a su vez, siempre están representados culturalmente y se entienden de formas particulares. Es aquí donde se hace posible hablar de los Estados, y no solo de naciones (Anderson, 1991), como "imaginados", es decir, como entidades construidas que se conceptualizan y se hacen efectivas socialmente mediante dispositivos particulares imaginativos y simbólicos que requieren estudio (Bayart, 1993; Bernal, 1997; Cohn, 1996; Comaroff, 1998; Coronil, 1997; Corrigan y Sayer, 1985; cf. Fallers, 1971; Geertz, 1980; Joseph y Nugent, 1994; Nugent, 1997; Scott, 1998, Taussig, 1996).

En este artículo, nuestra contribución a esta literatura es doble. En primer lugar, argumentamos que los debates sobre la imaginación del Estado no han prestado la debida atención a las formas en que se espacializan los Estados.[2] ¿Cómo es que las personas llegan a experimentar el Estado como una entidad con ciertas características y propiedades espaciales? ¿Por medio

2 Existe una larga y rica tradición de estudios realizados por geógrafos y teóricos sociales sobre la construcción social del espacio en las condiciones de la modernidad y la posmodernidad. Basándose en una antigua, aunque a menudo infravalorada, tradición de pensamiento espacial dentro del marxismo (especialmente la obra seminal de Henri Lefebvre [1991]), geógrafos sociales como David Harvey (1985 a, 1985 b, 1990) y Doreen Massey (1984, 1994) han mostrado cómo las cambiantes formas de producción capitalista han estructurado los espacios urbanos y las experiencias sociales que se desarrollan en ellos. Mientras tanto, los teóricos de la globalización, como Saskia Sassen, han mostrado cómo las prácticas estatales de regulación (desde el control de la inmigración hasta las regulaciones financieras) se entrecruzan con los flujos transnacionales de capital para generar zonas económicas nacionales y subnacionales altamente diferenciadas dentro de un espacio económico cada vez más global (1991, 1996, 1998). Pero, aunque estas contribuciones ayudan a mostrar cómo pueden actuar los Estados para construir el espacio social y económico y para configurar la forma en que se construyen, experimentan y habitan los lugares, no abordan la cuestión que nos ocupa aquí y aunque está relacionada, es distinta: ¿Cómo se espacializan los propios Estados?
También nos hemos beneficiado en gran medida de un corpus reciente de trabajos en antropología que trata de comprender etnográficamente las consecuencias espaciales de las políticas estatales (véanse, por ejemplo, Bernal 1997; Darian-Smith 1999; Grant 1995; Herzfeld 1991; Merry 2001; y Verdery 1996). Esta literatura es la que nos ha permitido perseguir nuestra propia cuestión, ligeramente diferente, de cómo se espacializa el propio Estado.

de qué imágenes, metáforas y prácticas de representación llega a entenderse el Estado como una realidad concreta, global y espacialmente abarcadora? ¿A través de qué conjuntos específicos de metáforas y prácticas los Estados se representan a sí mismos como entidades cosificadas con propiedades *espaciales* particulares (concretamente, lo que describiremos como propiedades de "englobamiento vertical o abarcamiento vertical")?[3] Al hacerlo, contribuyen a asegurar su legitimidad, a naturalizar su autoridad y a representarse a sí mismos como superiores a otras instituciones y centros de poder y englobadores o abarcadores de estos. Nos referimos al funcionamiento de estas metáforas y prácticas como "la espacialización del Estado". En la primera parte de este artículo, identificamos algunos métodos clave por medio de los cuales los Estados logran esta espacialización y tratamos de demostrar, a través de un ejemplo etnográfico, que las prácticas burocráticas rutinarias del Estado son parte integrante de tales logros.

En la segunda parte del artículo, nos basamos en este debate para evidenciar su relevancia para el tema de la globalización. Argumentamos que una economía política cada vez más trasnacional plantea hoy nuevos retos a las formas familiares de espacialización del Estado. Tras desarrollar un concepto de gobernabilidad trasnacional, analizamos la relación entre los Estados africanos débiles y una red emergente de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) transnacionales, y mostramos cómo estos acontecimientos alteran las concepciones convencionales de la espacialidad estatal. Sugerimos que la atención a las formas cambiantes de espacialización estatal podría enriquecer la antropología del Estado y aclarar ciertos aspectos de la política contemporánea de la globalización.

Primera parte: el estado espacializado: cuestiones conceptuales

Dos imágenes confluyen en los discursos populares y académicos sobre el Estado: las de *verticalidad* y *englobamiento o abarcamiento. La verticalidad* se refiere a la idea central y generalizada del Estado como una institución que de algún modo está "por encima" de la sociedad civil, la comunidad y

3 Ann Anagnost presenta un magnífico ejemplo de este fenómeno en su análisis de la espléndida China (1997: 161-175).

la familia. Así, la planificación estatal es inherentemente "de arriba hacia abajo" y las acciones del Estado son esfuerzos para manipular y planificar "desde arriba", mientras que "las bases" contrastan con el Estado precisamente en que están "debajo", más cerca del suelo, más auténticas y más "arraigadas". La segunda imagen es la del englobamiento o abarcamiento: *aquí*, el Estado (fusionado conceptualmente con la nación) se sitúa dentro de una serie de círculos cada vez más amplios que comienza con la familia y la comunidad local y termina con el sistema de Estados nación.[4] Se trata de una comprensión profundamente dependiente de la escala, en donde la localidad es abarcada por la región, la región por el Estado nación y el Estado nación por la comunidad internacional.[5] Estas dos metáforas funcionan juntas para producir una imagen espacial y escalar asumida de un Estado que se sitúa tanto por encima como conteniendo a sus localidades, regiones y comunidades.

Tales imágenes de englobamiento vertical del Estado son evidentes, por ejemplo, en los debates académicos sobre las llamadas relaciones Estado-sociedad, un tema que ha dominado las recientes discusiones sobre el Estado en la ciencia y la teoría políticas. La idea de *sociedad civil* ha sido abrazada tanto por los defensores neoliberales del ajuste estructural en África e India como, por diferentes razones, por muchos de sus más firmes críticos (cf. Ferguson, en prensa). Pero, lo que sea que pueda decirse sobre la oposición entre Estado y sociedad civil, es evidente que por lo regular trae consigo una imagen bastante específica, a menudo no reconocida, de englobamiento/abarcamiento) vertical, una en la que el Estado se sitúa de alguna manera "por encima" de una entidad "sobre el terreno" llamada

4 Marilyn Strathern (1995) ha planteado una crítica diferente a esta postura y argumenta que el hecho de que la antropología parezca encauzar su conocimiento a través de las personas no implica que la persona constituya una escala elemental de la organización social. Maurer (1998) ofrece un ejemplo de cómo convergen los proyectos espaciales y estatistas cuando el englobamiento se realiza mediante la incorporación.

5 Que el englobamiento espacial se plantee a menudo en términos de círculos tan nítidamente anidados no implica que las regiones, localidades o comunidades encajen en realidad de forma tan nítida en los niveles "superiores" que supuestamente las engloban; de hecho, una serie de fenómenos, desde las zonas fronterizas hasta las comunidades transnacionales, confunden en la práctica esta imagen. La segunda parte desarrolla las implicaciones de esta observación.

"sociedad".[6] El Estado, por supuesto, ha sido concebido durante mucho tiempo en Occidente, a través de una "transcodificación" no reconocida del cuerpo político con el cuerpo humano organísmico (Stallybrass y White, 1986), como poseedor de funciones "superiores" como la razón, el control y la regulación, frente a la irracionalidad, las pasiones y los apetitos incontrolables de las regiones inferiores de la sociedad.[7] Por tanto, no es de extrañar que, donde la teoría política occidental ha opuesto la sociedad civil al Estado, haya sido a menudo como una especie de amortiguador entre lo bajo y lo alto, una zona intermedia imaginada de contacto o mediación entre el ciudadano, la familia o la comunidad, por un lado, y el Estado, por otro.[8] Para Hegel (por tomar un ejemplo fundacional), el Estado era literalmente "mente objetivada" (1942: 156), y la sociedad civil precisamente el intermediario entre la particularidad natural fundacional de la familia y la universalidad ideal del Estado. Por tanto, el Estado era "superior" a la sociedad civil (tanto ética como políticamente) y también la englobaba o la abarcaba.[9]

Pocos estudiosos de hoy, por supuesto, respaldarían la concepción de Hegel de la burocracia estatal como la encarnación de los ideales colectivos más elevados de la sociedad, y la crítica feminista hace tiempo que puso al descubierto las maniobras por medio de las cuales la separación, de una "sociedad" pública y política de una "familia" privada y personal, naturalizó la dominación patriarcal (por ejemplo, Ferguson, 1984; Pateman,

---

6 El concepto de sociedad civil surge claramente de una historia europea específica; al igual que Chatterjee (1990), hacemos hincapié en la particularidad histórica y cultural del concepto, incluso cuando nos preocupa su universalización operativa como parte del paquete estándar de formas institucionales e ideológicas que han llegado a estar tan distribuidas como el propio Estado moderno. Pero no es solo la categoría, sociedad civil, la que requiere ser vista en su particularidad cultural, sino una topografía imaginaria más amplia por medio de la cual el Estado y la sociedad son visualizados en relación unos con otros.

7 Verdery establece una conexión muy interesante entre la nación y el cuerpo (1996: 63).

8 No todos los teóricos han hecho tal oposición; de hecho, los primeros escritores sobre la sociedad civil (por ejemplo, Locke) veían la sociedad civil como sinónimo de "sociedad política" (véase Taylor, 1990: 105).

9 Sobre la historia del concepto de sociedad civil, véase Burchell, 1991; Chatterjee, 1990; Comaroff y Comaroff, 1999; Seligman, 1992.

1988; Rosaldo, 1980; Yanagisako y Collier, 1987). Pero la vieja metáfora topográfica, que permitía a la sociedad civil aparecer como una zona de mediación entre un Estado "allá arriba" y una comunidad "sobre el terreno", sigue omnipresente y sorprendentemente resistente al escrutinio crítico. Los participantes en debates recientes sobre la esfera pública (por ejemplo, Calhoun, 1992) y la sociedad civil (Chatterjee, 1990; Cohen y Arato, 1992; Harbeson *et al*., 1994; Taylor, 1990) avanzan posiciones políticas y teóricas diversas, pero comparten en gran medida una topografía de sentido común dentro de la cual el objeto de su teorización se sitúa, en cierto sentido, "entre" el Estado y las comunidades, los grupos de interés y los mundos vitales que los Estados deben gobernar.

Una topografía imaginada de niveles apilados y verticales también estructura muchas imágenes asumidas de la lucha política, las cuales son fácilmente imaginadas como provenientes "de abajo", como "enraizadas" en vidas, experiencias y comunidades arraigadas y auténticas. El propio Estado, por su parte, puede ser imaginado como descendiendo hacia las comunidades, interviniendo, de manera "descendente", para manipular o planificar la sociedad. La sociedad civil, en esta topografía vertical, aparece como la latitud intermedia, la zona de contacto entre el Estado "de ahí arriba" y la gente "sobre el terreno", acogida en sus comunidades. Tanto si esta zona de contacto se concibe como el dominio de los grupos de presión y la política pluralista (como en la teoría política liberal) o de la lucha de clases en una guerra de posiciones (como en el marxismo gramsciano), la topografía vertical del poder ha tenido enormes consecuencias.

Imaginar la relación del Estado con la sociedad mediante la imagen del englobamiento vertical fusiona en una sola y poderosa imagen una serie de proposiciones analíticamente distintas. ¿Es la altura abarcadora del Estado una cuestión de rango superior en una jerarquía política? ¿De escala espacial? ¿De abstracción? ¿De generalidad de conocimientos e intereses? ¿Distanciamiento de la naturaleza? La confusión engendrada al agrupar estas distintas proposiciones es de hecho productiva, en el sentido foucaultiano, de que construye un Estado de sentido común que simplemente *está* "ahí arriba" en alguna parte, operando a un "nivel superior". La cuestión no es que esta imagen del Estado "de ahí arriba" sea falsa (y menos aún que no exista la

jerarquía política, la generalidad de intereses, etc.), sino que es construida; la tarea no es denunciar una falsa ideología, sino llamar la atención sobre los procesos sociales e imaginativos por medio de los cuales la verticalidad estatal se hace efectiva y autoritaria.

Las imágenes del englobamiento vertical del Estado son influyentes no solo por su impacto en la forma en que académicos, periodistas, funcionarios, activistas y ciudadanos imaginan y habitúan los Estados, sino porque llegan a incrustarse en las prácticas rutinarias de las burocracias estatales. Las metáforas por las cuales se imaginan los Estados son importantes, y la erudición en este ámbito ha hecho recientemente grandes avances.[10] Pero la comprensión de las prácticas sociales a través de las cuales estas imágenes se hacen efectivas y se experimentan está menos desarrollada. Esta relativa falta de atención a las prácticas estatales parece peculiar, ya que los Estados, de hecho, invierten una gran cantidad de esfuerzos en desarrollar procedimientos y prácticas para garantizar que sean imaginados de unas formas y no de otras (Scott, 1998). Parecen reconocer que se requiere una serie de rituales y procedimientos mundanos que anime y naturalice las metáforas si se quiere que los Estados logren ser imaginados como superiores a la sociedad y a la vez abarcadores de esta.

La importancia de los rituales y rutinas mundanas de la espacialización del Estado es fácilmente reconocible en lo que respecta a la regulación y vigilancia de las fronteras de los Estados nación. Pero la vigilancia de la frontera está íntimamente ligada a la vigilancia de Main Street en el sentido de que son actos que representan el poder represivo del Estado como algo extensivo a los límites territoriales de la nación y que impregna

10 Véanse en especial contribuciones como la discusión de Bayart (1993) sobre el "comer" como metáfora del poder estatal en África, y el análisis de Mbembe (1992) sobre cómo el imaginario de lo vulgar y lo grotesco en la cultura popular de Camerún llega a revestir los símbolos del poder estatal. Las formas en que las metáforas espaciales del englobamiento vertical que analizamos aquí pueden coexistir con otras metáforas para representar a los Estados constituyen un rico terreno para futuras investigaciones. Otras contribuciones importantes a un reciente y animado debate sobre el Estado en el África poscolonial son Bayart *et al*., 1999; Chabal y Daloz, 1999; Mamdani, 1996; Werbner y Ranger, 1996.

intensamente cada centímetro cuadrado de ese territorio.[11] Sin embargo, la espacialización estatal es mucho más que vigilancia o represión. La benevolencia estatal, no menos que la coerción, también debe hacer sus rondas espaciales, como queda claro, por ejemplo, en los recorridos rituales de los presidentes estadounidenses que se dejan caer desde el cielo en helicópteros para dispensar ayuda tras los desastres naturales.

Aunque tales ejemplos espectaculares constituyen ilustraciones convenientes, quizá sea más importante fijarse en los ámbitos menos dramáticos, múltiples y mundanos de la práctica burocrática, mediante los cuales los Estados reproducen los órdenes espaciales y las jerarquías escalares.[12] Cualquier intento de comprender la espacialización estatal, por tanto, debe atender a un tiempo a las comprensiones teóricas y a la encarnación burocrática. La fuerza de las metáforas de verticalidad y englobamiento resulta tanto del hecho de que están incrustadas en las prácticas cotidianas de las instituciones estatales como del hecho de que el funcionamiento rutinario de las instituciones estatales *produce* jerarquías espaciales y escalares.

En la sección que sigue exploramos esta relación entre órdenes espaciales y estatistas mostrando cómo se producen de forma mutua.[13] Dado que las prácticas estatales están complicadas con órdenes y metáforas espaciales, un análisis del imaginario del Estado debe incluir no sólo representaciones discursivas explícitas del Estado, sino también prácticas significantes implícitas, no marcadas. Estas prácticas mundanas a menudo se deslizan por debajo del umbral de la discursividad, pero alteran profundamente cómo se orientan los cuerpos, cómo se viven las vidas y cómo

11 Un ejemplo especialmente claro de este tipo de control policial lo proporciona el trato recibido por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos a manos del INS y de la policía, que demuestra con bastante claridad que la frontera no es solo una línea que se cruza hacia una zona de seguridad, sino una zona de exclusión que impregna el interior del territorio del Estado nación (véase, por ejemplo, Chavez, 1998). Heyman (1998) va incluso más lejos al establecer una conexión explícita entre el control de la frontera entre Estados Unidos y México y las guerras extranjeras como Vietnam a través del recurso de la ilegalidad.

12 El término *orden* se utiliza aquí tanto en su intención directiva como en sus connotaciones organizativas.

13 No se trata ni de reducir uno al otro ni de reivindicar algún tipo de relación privilegiada, en comparación, por ejemplo, con la relación del espacio con el capital.

se forman los sujetos. Esta concepción orientada a la práctica exige un enfoque etnográfico. No pretendemos ofrecer aquí un tratamiento etnográfico completo porque este artículo se ocupa sobre todo de identificar un programa de investigación más que de presentar los resultados de algún programa. Pero puede resultar útil ofrecer una breve ilustración de cómo una visión etnográfica de las prácticas estatales mundanas puede iluminar la mecánica de la espacialización del Estado.

Rituales y representaciones de la espacialización del poder estatal en la India

El Gobierno de India puso en marcha en 1975 el programa de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS), conocido popularmente como Programa Anganwadi, poco después de la formulación de la Política Nacional para la Infancia. Fue impulsado por la toma de conciencia de que India presentaba algunas de las tasas más altas del mundo de mortalidad infantil, morbilidad y malnutrición, y tasas extremadamente altas de mortalidad materna durante el parto. El objetivo del Programa Anganwadi era proporcionar un paquete de servicios bien integrados consistentes en nutrición suplementaria para mujeres embarazadas y niños pequeños, así como educación, inmunizaciones y medicina preventiva para niños pobres y de castas inferiores. El Programa Anganwadi ilustra bien la preocupación por el bienestar de la población que Foucault identifica como el aspecto central de la "gobernabilidad" en el mundo moderno.[14]

La estructura de mando de la burocracia del ICDS en el ámbito del distrito seguía una forma piramidal típica. El Oficial de Programas del Distrito (OPD) dirigía la oficina. De él dependían los dos oficiales del Proyecto de Desarrollo Infantil (OPDC) que dirigían los programas a nivel de bloque.[15] Los OPDC supervisaban una oficina formada por personal administrativo y un conductor, y también supervisaban a los cuatro supervisores *(Mukhya Sevikas)* que, a su vez, se ocupaban de los 86 trabajadores

14 Véase la discusión en las páginas 998-991.

15 El bloque es la unidad administrativa más pequeña de la India y comprende aproximadamente un centenar de pueblos.

anganwadi y del mismo número de ayudantes del bloque.[16] La jerarquía piramidal del programa se hizo visible a sus empleados mediante dispositivos de representación burocrática estándar como los organogramas.[17] Pero, lo que es más importante, la jerarquía se realizó mediante una serie de prácticas de englobamiento espacial, de las que se dan algunos ejemplos a continuación.

El Programa Anganwadi funcionaba por medio de anganwadis o centros, dirigidos por una trabajadora y su ayudante de 9:00 a 13:00, seis días a la semana. Dirigir el centro implicaba ocuparse de hasta 45 niños, enseñarles, cocinar los alimentos para su comida de mediodía, supervisar su atención médica y mantener los registros. En Mandi, el bloque del que se han recolectado estos datos, todos los ayudantes, trabajadores anganwadian y supervisores, así como el OPDC, eran mujeres; el resto del personal de la oficina eran hombres.[18]

Explorar este proyecto en el contexto de un análisis de la espacialidad estatal suscita de inmediato varias preguntas: ¿Cómo se especializó el programa ICDS? ¿Por medio de qué procedimientos y técnicas de racionalidad burocrática se hicieron reales y tangibles la verticalidad y el engrandecimiento estatales? ¿Cómo se fijó a ciertas personas y poblaciones en un lugar, se les hizo "locales", mientras que otras más elevadas podrían considerarse más móviles, más abarcadoras? Los trabajadores estatales de nivel superior, en particular, representaban una paradoja interesante. Por un lado, su presencia en la aldea hacía más difícil sostener la imagen del Estado *por encima de la* sociedad civil y la familia; por otro, como miembros marginales del aparato estatal, proporcionaban un ejemplo concreto a otros aldeanos de la verticalidad y el englobamiento del Estado. Los

16 El número de trabajadores y ayudantes anganwadi variaba de un bloque a otro, dependiendo de la población a la que se atendía y de los fondos asignados al programa.

17 La estructura piramidal de la burocracia seguía un patrón clásico, fordista, de organización industrial. A diferencia de las burocracias de las empresas del capitalismo tardío o de otras organizaciones posfordistas, no había ni rastro de una estructura organizativa plana o de una toma de decisiones descentralizada.

18 Siguiendo la convención antropológica, el nombre "Mandi", así como los nombres de las personas y pueblos son seudónimos y aparecen a continuación.

trabajadores anganwadi, quizá incluso más que otros aldeanos, experimentaron el Estado como una organización "por encima de ellos" que se ocupaba sobre todo de la vigilancia y la regulación, incluso cuando ellos mismos servían como agentes de esa vigilancia.

Con el fin de contextualizar los ejemplos etnográficos que siguen, comenzaremos con una breve descripción de la oficina del ICDS en Mandi.[19] Cuando buscó por primera vez la oficina del ICDS, el etnógrafo (Gupta) pasó de largo porque las indicaciones que le habían dado se relacionaban con un jeep azul de Unicef que servía de mascota no oficial del programa. No pudo localizar la oficina porque el jeep había desaparecido y, a diferencia de otras oficinas gubernamentales que mostraban grandes carteles, no había indicación externa alguna de que existiera una oficina en ese edificio. Era un espacio indescriptible, modesto consistente en un pequeño camino de entrada apenas lo suficientemente grande para un vehículo, y un estrecho tramo de escaleras a un lado. Las escaleras conducían a una terraza, que se abría a tres habitaciones, la más alejada pertenecía a la dinámica y elocuente OPDC del bloque Mandi, Asha Agarwal. Sentada detrás de un escritorio bastante grande en una habitación poco amueblada y decorada, tenía un timbre en su escritorio, que pulsaba cada vez que necesitaba llamar la atención del peón.

Haciendo trabajo de campo en la oficina del ICDS, fue posible comprobar cómo la integración se materializaba en las prácticas cotidianas del programa. El mecanismo más importante fue el de la inspección sorpresa. Los trabajadores anganwadi se situaban en la parte inferior de una jerarquía burocrática en la que el ritual de la vigilancia y la regulación como instrumento de control ocupaba un lugar central. Eran objeto de inspecciones sorpresa por parte de una multitud de oficiales superiores visitantes. Una de las principales preocupaciones de los oficiales era controlar el grado en que los trabajadores anganwadi recopilaban datos, en particular información sobre las mujeres y los niños que eran los destinatarios del programa ICDS. En este sentido, el objeto de la vigilancia de los oficiales era la vigilancia ejercida por los trabajadores anganwadi

19 El siguiente texto se basa en las observaciones sobre el terreno realizadas por Akhil Gupta.

sobre "sus" poblaciones. La lógica de este tipo de regulación recursiva no puede explicarse en términos funcionales porque la mayor parte de esta actividad era irrelevante para las necesidades del Estado. Más bien, lo que estos rituales de vigilancia conseguían en realidad era *representar* y *encarnar la* jerarquía y el englobamiento estatal.

Fue posible acompañar a Asha Agarwal en un par de inspecciones. Ella había planeado con todo cuidado el itinerario para incluir centros anganwadi que tuvieran registros de buen rendimiento. Pero el hecho de que se tratara de visitas sorpresa significaba que no podían servir como ejercicios de relaciones públicas exentos de problemas. El primer viaje tuvo lugar un día frío y nublado de febrero de 1992, poco después de que la oficina hubiera recibido un nuevo desembolso de fondos para comprar gasolina para el jeep.

El primer pueblo fue Kalanda. Había dos anganwadis en Kalanda que habían estado funcionando desde 1985, cuando comenzó el proyecto ICDS en el bloque de Mandi. La aldea se caracterizaba por el buen estado de sus carreteras interiores y la ausencia total de aguas residuales y basura en las calles. Muchos hombres del pueblo eran albañiles, que habían regresado del Golfo, y que habían ofrecido voluntariamente su mano de obra para construir las carreteras y los desagües.

La primera inspección fue la de un anganwadi ubicado en una habitación oscura que servía de almacén a una familia campesina. Una enorme pila de lentejas ocupaba la mitad de la habitación, cubriendo por completo una pared y una parte considerable del suelo. La trabajadora anganwadi local, una mujer agradable y enérgica, envió rápidamente a la ayudante a reunir a más niños para añadirlos a los catorce que ya estaban allí. Asha pidió a los niños que contaran y recitaran el alfabeto, lo que hicieron con facilidad. Un niño en particular, que era un poco mayor que el resto, había anotado los números hasta el cien en su pizarra y también había memorizado todos los poemas y canciones que se habían enseñado a los niños. Durante la visita, entraron varios niños que parecían bañados y aseados. Asha me dijo que la maestra solo tenía el título de bachillerato, pero parecía estar haciendo un buen trabajo con los niños. Regañó a la trabajadora anganwadi por no

retirar los gráficos, que funcionaban como material didáctico, de la pared donde se habían amontonado las lentejas. "Es tu trabajo cuidar de los gráficos", le dijo. "Cuando sabía que la cosecha se iba a almacenar allí, ¿por qué no retiró los gráficos de antemano?". Tras inspeccionar los registros de asistencia y escribir un breve informe en el registro de inspección, en el que se anotaba cuándo había tenido lugar la inspección, cuántos niños había y qué habían demostrado los niños, Asha indicó que era hora de abandonar el centro y pasar al segundo.

El segundo centro de Kalanda funcionaba en el porche de una casa. Pero el trabajador de Anganwadi no aparecía por ninguna parte. Solo había un grupo de niños muy pequeños presentes. La ayudante afirmó desconocer el paradero de la trabajadora anganwadi. Asha y el supervisor intentaron persuadir a algunos de los niños para que se pusieran de pie y recitaran la tabla numérica o identificaran objetos en una tabla alfabética. Ninguno de ellos obedeció. Fue difícil establecer si era por miedo a los visitantes o porque no estaban familiarizados con la tarea. Asha dejó una nota en el registro de inspección para exigir que la trabajadora anganwadi diera una explicación en un plazo de veinticuatro horas de por qué había desaparecido de su puesto. Justo cuando el grupo de Asha se dirigía de vuelta al jeep, llegó la trabajadora anganwadi. Se disculpó profusamente y argumentó que su retraso obedeció a que el autobús en el que viajaba se había averiado. Asha la reprendió con firmeza. Aunque su autobús se hubiera averiado, dijo, eso no era excusa para llegar al centro a las 11:15 a.m. en vez de a las 9:00 a.m. La trabajadora anganwadi se lamentó de su suerte, diciendo que tenía mala suerte puesto que el único día en que empezaba tarde fue el día en que casualmente Asha la visitó. Asha observó con cierta ironía la gran diferencia evidenciada entre el centro que dirigía la mujer que solo había "aprobado el bachillerato" y el segundo, pese a que la trabajadora anganwadi tenía una maestría. Parecía sorprendida por ello porque, en el pasado, había comprobado que la profesora con mejor formación había hecho un trabajo muy bueno.

Una de las principales funciones de los trabajadores anganwadi, y ciertamente la actividad que más tiempo consumía, consistía en documentar y generar estadísticas. Una infinidad de registros anotaba diferentes aspectos

del funcionamiento del anganwadi: por ejemplo, un registro de asistencia anotaba cosas como cuántos niños había en un centro cada día y quiénes eran: sus nombres, los nombres de sus padres y sus castas. Un registro de nutrición anotaba cuánta comida y combustible se consumía; un tercer registro se utilizaba para recordar las fechas de nacimiento de cada niño nacido en el pueblo, los nombres de sus padres, sus edades y sus castas. Se llevaban registros similares de todas las defunciones. El nombre, la edad y la casta de cada mujer gestante y el registro del resultado del embarazo se anotaban en otro archivo. Un cuaderno de viaje mantenía un registro de cuándo y por qué faltaba un trabajador anganwadi de un centro. Se mantenía un registro de inspección en el que los supervisores, el OPDC y otros visitantes anotaban sus impresiones sobre el funcionamiento de anganwadi. Los registros eran dispositivos de autocontrol-tecnologías de autodisciplina que, por un lado, se configuraban en portafolios para registrar la eficacia de la atención a la población y, por otro, para permitir la vigilancia y el control de los trabajadores.[20]

Las inspecciones sorpresa y los registros eran dos dispositivos mediante los cuales se practicaban la verticalidad y el englobamiento o abarcamiento. No era solo que los oficiales superiores de los niveles "más altos" viajaran en jeeps, estableciendo así su control sobre el espacio geográfico de la manzana, el distrito y el estado (cualquiera que fuera su jurisdicción); también viajaban para realizar inspecciones, disciplinar, recompensar, alentar y castigar. Los registros les ayudaban a hacer precisamente eso porque les permitían cotejar sus observaciones con lo anotado. Por ejemplo, Asha se quejaba de que los trabajadores que dirigían los centros anganwadi en sus casas solían traer más niños cuando veían a lo lejos el polvo que levantaba el jeep que se acercaba. Así, para cuando la OPDC llegaba al centro, ya había muchos niños allí, aunque el anganwadi no hubiera estado funcionando; sin embargo, en esos casos se las arreglaba para descubrir el "engaño" del trabajador comparando los nombres de los niños presentes con los nombres (si los había) anotados en el registro de asistencia. La capacidad de

20 Aunque aquí hemos optado por centrarnos en la vigilancia del trabajador anganwadi y no en el bienestar de la población, nuestro argumento sobre la verticalidad y el englobamiento del Estado podría haberse demostrado igualmente centrándonos en los aspectos "positivos" de la gobernabilidad.

la OPDC para abalanzarse sobre el espacio de la trabajadora anganwadi estaba mediada por la semiótica del polvo, una señal de humo emitida por ese mismo dispositivo —el jeep— que le permitía entrar de repente en el espacio profesional de la trabajadora anganwadi local.

La inspección sorpresa era un ritual de control que establecía y demostraba jerarquía, pero el modo de llevar a cabo la inspección, el repentino "descenso" en picada al espacio geográfico de la trabajadora anganwadi, fue una demostración de la inequidad de los espacios. Los trabajadores anganwadi acudían a la oficina principal del ICDS a la hora establecida, cada mes; su capacidad para entrar en el espacio del funcionario superior era limitada y circunscrita, lo que muestra un marcado contraste con la inspección sorpresa. La capacidad de transgredir el espacio (prerrogativa de los oficiales "superiores") era también un dispositivo de englobamiento, ya que era su posición en la jerarquía vertical la que otorgaba a los oficiales el privilegio de un tipo particular de movilidad espacial, una movilidad cuya función y objetivo era regular y disciplinar.

La conjunción de la jerarquía con circuitos de movimiento cada vez más amplios encuentra un tipo de expresión diferente en el sistema de traslados, que constituye un aspecto importante de la vida de los empleados estatales en la India. Se supone que los funcionarios son trasladados cada tres años; en la práctica, este periodo es incluso más corto. Lo que resulta interesante a propósito de la reflexión sobre la espacialización del Estado es la circunferencia de lo que Benedict Anderson (1991) ha denominado "peregrinaciones burocráticas". Cuanto más "arriba" están los funcionarios, más amplio es el alcance geográfico de sus peregrinaciones y más abarcadora es su óptica sobre el dominio de la actividad estatal y su relación con lo que es meramente "local". Una vez más encontramos que la verticalidad y el englobamiento están íntimamente ligados unos a otros.

Uno de los principales mecanismos por los que los funcionarios "superiores" en la burocracia llegaron a ocupar las altas esferas del Estado (con su connotación de mayor visión; un mejor sentido del bien general, y el interés nacional, en contraposición al local) fue posicionando a los trabajadores "de nivel inferior", a los políticos "locales" y a los aldeanos

"locales" como personas que pertenecían a comunidades concretas y articulaban sus intereses, con una generalización limitada a zonas geográficas, o a divisiones de clase y casta. ¿Cómo funcionó en la práctica esa localización? ¿Por medio de qué mecanismos se fijó en el espacio a ciertas personas como gente local con preocupaciones locales mientras que otras llegaron a ser vistas, y a verse a sí mismas, como preocupadas por cuestiones "más amplias" que atravesaban el espacio geográfico y político? Algunos ejemplos concretos de localización en el programa ICDS podrían ayudar a hacer visible esta dinámica.

Por su propia etimología —la palabra *anyan* significa 'patio', el espacio de las casas de las aldeas del norte de India donde las mujeres pasan la mayor parte del tiempo— el programa anganwadi subraya su relación con un espacio reducido, cercado y doméstico. Al contrario de la imagen evocada por esta asociación, los centros anganwadi funcionaban de hecho por lo regular en espacios públicos, ya fuera en los patios de las casas o, cuando estaban disponibles, en centros comunitarios. Una de las expectativas del ICDS era que estos espacios para los anganwadis fueran donados por la comunidad. Por tanto, no había provisión alguna para alquileres en el presupuesto del ICDS. Aparte de reducir el costo de administración del programa, tal exigencia pretendía proporcionar a la comunidad una participación en el funcionamiento de los anganwadis y, muy probablemente, estaba influida por el diseño de agencias internacionales y bilaterales como Unicef, USAID y Danida (Danish International Development Assistance). De acuerdo con la ortodoxia del desarrollo, una de las lecciones aprendidas en el pasado referente a la elevada tasa de fracaso de los proyectos de desarrollo, es que carecían de la participación de la comunidad local. De ahí que el ICDS dispusiera de un "hueco" para la participación de la comunidad, en forma de provisión de espacio. Esto creó muchas dificultades para los trabajadores anganwadi y fue una de sus principales quejas, ya que el espacio libre era escaso y a menudo se reclamaba para fiestas de boda y almacenamiento de la cosecha.

¿Es sorprendente que los agentes de la localización fueran justo esas entidades que —el Estado indio y las agencias multilaterales de ayuda— reclaman para sí geografías e intereses que son nacionales y universales?

De este modo, el programa trabajó para crear una localización estructural y espacial para la trabajadora anganwadi como funcionaria marcada por sus vínculos con la localidad y la particularidad. La localización de la trabajadora anganwadi es precisamente lo que permitió a esas instituciones superiores renunciar a lo particular para representar el bien "mayor", y el dominio "mayor" de la nación y el mundo.

Segunda parte: Gobernabilidad transnacional - Desafíos contemporáneos a la espacialización del Estado

La gobernabilidad y lo global

En la sección anterior, mostramos algunos de los medios por los cuales un Estado puede crear, mediante prácticas mundanas y no marcadas, una poderosa impresión de englobamiento vertical de lo "local". Pero estos esfuerzos de los Estados por establecer sus pretensiones espaciales superiores a la autoridad no quedan impunes. Esto es cierto en particular en un momento en el que las nuevas formas de conexión trasnacional están permitiendo cada vez más a los actores "locales" desafiar las bien establecidas pretensiones del Estado de englobamiento y superioridad vertical de formas inesperadas, como demuestran hoy en día multitud de organizaciones "de base" mundanas y bien conectadas.

Si siempre se puede contar con los funcionarios para invocar el interés nacional en formas que pretenden abarcar (y por tanto devaluar) lo local, los operadores astutos "de base" pueden triunfar sobre ese interés o poder nacional con apelaciones a la "opinión mundial" y enlaces de correo electrónico a las sedes internacionales de agentes de vigilancia tan significativamente abarcadores o envolventes como Amnistía Internacional, Africa Watch o World Vision International. Por tanto, la medida en que los Estados tienen éxito en establecer sus pretensiones de abarcar lo local no está predeterminada, sino es resultado contingente de procesos sociopolíticos específicos. Y, como deja especialmente claro la precaria situación de muchos Estados en África hoy en día, el Estado no tiene

derecho automático al éxito en la reivindicación de las alturas verticales de la soberanía.

Al pensar en la relación entre los Estados y una serie de organizaciones supranacionales y transnacionales contemporáneas que se solapan de manera significativa con sus funciones tradicionales, nos ha parecido útil desarrollar una idea de *gobernabilidad transnacional*, tomando prestada la idea de gobernabilidad introducida por primera vez por Michel Foucault (1991). Foucault llama la atención sobre todos los procesos por los que se rige la conducta de una población: por instituciones y agencias, incluido el Estado; por discursos, normas e identidades, y por autorregulación, técnicas para la disciplina y el cuidado del yo. La economía política como conocimiento y los aparatos de seguridad como medios técnicos han operado sobre la población para constituir la gobernabilidad como el modo de poder dominante desde el siglo XVIII (Foucault, 1991: 102). La gobernabilidad se ocupa sobre todo de "la conducta de la conducta" (Dean, 1999: 10), es decir, de las innumerables formas en que la conducta humana es dirigida por medios calculados. A Foucault le interesaban los mecanismos de gobierno que se encuentran dentro de las instituciones estatales y fuera de ellas, mecanismos que, de hecho, atraviesan ámbitos que consideraríamos separados: el Estado, la sociedad civil, la familia, hasta los detalles más íntimos de lo que consideramos vida personal. La gobernabilidad no designa una relación negativa de poder, una caracterizada enteramente por la disciplina y la regulación; con énfasis sobre su dimensión productiva.

Más recientemente, los académicos que trabajan en esta tradición han intentado refinar el análisis de la gobernabilidad para abordar el cambio del Estado del bienestar keynesiano hacia las llamadas políticas de libre mercado en las democracias occidentales. Aunque este giro hacia el neoliberalismo se ha entendido a menudo (y se ha celebrado o lamentado según la política de cada cual) como una "retirada" o un "retroceso" del Estado, Barry *et al*. subrayan que, más bien, ha supuesto una transferencia de las operaciones de gobierno (en el sentido más amplio de Foucault) a entidades no estatales, mediante "la fabricación de técnicas que pueden producir un grado de 'autonomización' de las entidades de gobierno

respecto al Estado" (1996: 11-12). La lógica del mercado se ha extendido al funcionamiento de las funciones estatales, de modo que incluso las instituciones tradicionalmente básicas del gobierno, como las oficinas de correos, las escuelas y la policía están —si no realmente privatizadas— al menos gestionadas según un "modelo empresarial" (Burchell, 1996). Mientras tanto, las operaciones sociales y reguladoras del Estado están cada vez más "desestatizadas" y son asumidas por una proliferación de "organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas" (Rose, 1996: 56).[21] Pero no se trata de menos gobierno, como pretenden las formulaciones ideológicas habituales. Más bien indica una nueva modalidad de gobierno que funciona mediante la creación de mecanismos que trabajan "por sí mismos" para conseguir resultados gubernamentales a través de la devolución del riesgo a la "empresa" o al individuo o ciudadano (ahora interpretado como el empresario de su propia "empresa") y la "responsabilización" de sujetos cada vez más "empoderados" para autodisciplinarse (véase Barry *et al*., 1996; Burchell, 1996; cf. Burchell *et al*,. 1991; O'Malley, 1998; Rose, 1996; Rose y Miller, 1992).

Estas extensiones del concepto foucaultiano de gobernabilidad al neoliberalismo son sin duda esclarecedoras y sugerentes. Pero siguen siendo sorprendentemente eurocéntricas, y están estrechamente ligadas a la idea del Estado nación territorialmente soberano como ámbito para el funcionamiento del gobierno.[22] Proponemos ampliar el debate sobre la gobernabilidad a los modos de gobierno que se están estableciendo a escala mundial. Estos incluyen no solo las nuevas estrategias de disciplina y regulación,

21 Un buen ejemplo lo ofrece la privatización de las prisiones: cada vez más, las empresas privadas han asumido la tarea de construir y explotar prisiones para el Estado. Una vez que un "modelo de empresa" se convierte en dominante, hay pocas razones para que muchas funciones estatales sean desempeñadas por instituciones estatales.

22 Resulta sorprendente, por ejemplo, que Rose (1996: 53) caracteriza el "liberalismo avanzado" como un conjunto de estrategias que "pueden observarse en contextos nacionales desde Finlandia hasta Australia" —sin ninguna discusión sobre la amplia gama de contextos nacionales (la mayor parte del mundo, al parecer) a los que su relato no se aplica—. Tampoco hay consideración alguna sobre las relaciones entre la ruptura de las nociones de bienestar en el ámbito nacional y las de desarrollo en el internacional, ni sobre las formas en que la proliferación de "ONG cuasi autónomas" podría estar vinculada a los cambios en el papel y la función del Estado nación dentro de un sistema global.

ejemplificadas por la OMC y los programas de ajuste estructural aplicados por el FMI, sino también las alianzas trasnacionales forjadas por activistas y organizaciones de base y la proliferación de organizaciones voluntarias apoyadas por complejas redes de financiación y personal internacionales y trasnacionales. La externalización de las funciones del Estado a las ONG y otras agencias ostensiblemente no estatales, argumentamos, es una característica clave no solo del funcionamiento de los Estados nacionales, sino de un sistema emergente de gobierno trasnacional.

La creciente prominencia de estos procesos debería poner en tela de juicio los marcos espaciales y escalares de los Estados soberanos que se dan por sentados. Pero en lugar de estimular un replanteamiento total de las imágenes espaciales y escalares, lo que encontramos es que las nociones recibidas de verticalidad y englobamiento se han extendido —a menudo de forma improbable— para adaptarse a las nuevas realidades. Así, las instituciones de gobernanza mundial como el FMI y la OMC suelen considerarse simplemente "por encima" de los Estados nacionales, del mismo modo que se hablaba de los Estados frente a las bases. De manera similar, a menudo se habla de lo "global" como si fuera simplemente un nivel escalar superior que engloba a los Estados nación, es decir, se conceptuaba que los Estados nación abarcaban a las regiones, las ciudades y los pueblos.

Las luchas entre los organismos que intentan fomentar un gobierno global y sus críticos han sido noticia primero en Seattle en noviembre y diciembre de 1999, luego en Washington, D.C., en abril de 2000 y, más recientemente (septiembre de 2000), en Praga. Uno de los aspectos más interesantes de estas protestas, así como de la cobertura documental y los comentarios sobre estas, es la dificultad experimentada tanto por los participantes como por los observadores para articular el papel del Estado nacional frente a los acuerdos "globales" y las protestas "populares". ¿Las instituciones que promueven la globalización —como el Banco Mundial, el FMI y la OMC— están tomando decisiones políticas que afectan a las vidas de las personas de todo el mundo sin los mecanismos normales de responsabilidad democrática, como acusan los manifestantes? ¿O se limitan estos organismos internacionales a facilitar los esfuerzos de "buena gobernanza" propuestos y aplicados por los Gobiernos nacionales, como

contrargumentan? Los observadores y comentaristas se esfuerzan por dar sentido a esta situación. Los periodistas señalan que los manifestantes están formados por grupos en apariencia inconexos que protestan por causas y motivos muy diferentes; además, muchos de los "grupos de base" que se oponen a la globalización son en sí mismos, quizá, ejemplos destacados de ella: organizaciones trasnacionales bien organizadas con oficinas o afiliaciones distribuidas por todo el mundo, que coordinan sus manifestaciones por medio de internet e incluso en tiempo real (durante los actos) mediante teléfonos móviles y *walkie-talkies*.

La confusión evidente en las concepciones tanto de importantes agencias de globalización como de los grupos activistas que se oponen a ellas (así como de quienes informan sobre ellas y las estudian) tiene que ver, al menos en parte, con cómo se especializan los Estados y qué relaciones existen entre espacio y gobierno. Los procesos de globalización han perturbado las metáforas y prácticas familiares de englobamiento vertical (que aún dan por sentadas los participantes en los debates sobre la globalización, incluidos periodistas y académicos), y el nuevo paisaje que está surgiendo solo puede entenderse a través de un replanteamiento de las cuestiones de espacio y escala. Para llevar a cabo dicho replanteamiento, será necesario cuestionar tanto los supuestos de sentido común sobre la verticalidad de los Estados como muchas ideas sobre "comunidad", "base" y lo "local", cargadas de nostalgia y del aura de la autenticidad.[23]

Para ello, nos resulta útil pasar de nuestro ejemplo etnográfico indio, en el que un Estado relativamente fuerte consigue especializarse de maneras familiares, a una visión macrológica de África, donde muchos Estados contemporáneos ya no son capaces, de manera significativa, de ejercer los poderes normalmente asociados a un Estado nación soberano, o incluso (en unos pocos casos) de funcionar como Estados en cualquier sentido convencional del término. Estos casos, sin duda extremos, nos ayudarán a descentrar el Estado y a poner en primer plano nuevas formas de gobernabilidad

23 Recientemente, numerosos antropólogos se han preocupado por problematizar la noción antropológica tradicional de lo local (aunque por lo común sin relacionar este concepto con la cuestión de la espacialización del Estado). Por razones de espacio, no reseñaremos esta literatura aquí, sino que nos limitaremos a remitir al lectora nuestro extenso debate sobre esta cuestión en Gupta y Ferguson (1997).

trasnacional que si bien, sugerimos, no son exclusivas de África, son especialmente visibles e importantes allí. Cabe señalar que nuestro objetivo no es establecer una comparación entre África e India. Más bien, el debate sobre la precaria situación de los Estados africanos ilustra de forma acertada una parte de nuestro argumento (sobre la creciente prominencia de la gobernabilidad transnacional), del mismo modo que el material indio ilustra útilmente otra parte del argumento (sobre el modo en que los Estados aseguran su autoridad y legitimidad mediante prácticas espaciales no marcadas que crean efectos de englobamiento vertical).[24]

Más allá de la verticalidad: gobernabilidad transnacional en África

Los estudiosos contemporáneos de la política africana siguen basándose en imágenes de Estados que abarcan todo verticalmente, incluso cuando las situaciones empíricas que se describen son cada vez menos susceptibles de plasmarse en tales términos. Está bastante claro que existe una serie de fenómenos en África contemporánea que no pueden entenderse con la antigua óptica de la "construcción nacional" que concebía la política africana poscolonial como una batalla entre un Estado modernizador y grupos étnicos primordiales. Pero la respuesta dominante a este hecho evidente ha sido el recurso a la idea de "sociedad civil" para englobar una mezcolanza dispar de grupos e instituciones sociales que solo tienen en común que existen de algún modo fuera o más allá del Estado (para una revisión crítica, véase Comaroff y Comaroff, 1999: 1-43). Las definiciones de "sociedad civil" en la literatura sobre el Estado y la sociedad suelen ser amplias y vagas, pero en la práctica los escritores pasan con bastante rapidez de las generalidades definitivas a una visión mucho más específica que se restringe casi por completo a las organizaciones pequeñas, de base y voluntarias. Este uso restringido deja fuera del juego a algunos fenómenos bastante importantes

24 Sin duda, son las diferencias empíricas entre la situación del Estado en los dos contextos regionales las que explican por qué cada uno ilustra mejor una parte diferente de nuestro argumento (a grandes rasgos, la relativa fortaleza del Estado indio frente a la debilidad institucional y financiera de tantos otros africanos), pero no es nuestro propósito explorar aquí esas diferencias de forma sistemática.

y obvios. Uno nunca está del todo seguro: ¿forma parte de esta "sociedad civil" la Anglo-American Corporation de Sudáfrica? ¿Forma parte de ella el ejército de John Garang en Sudán? ¿Lo es Oxfam? ¿Qué ocurre con los movimientos étnicos que no son tan opuestos o anteriores a los Estados modernos, sino (como demuestran estudios recientes) producidos por ellos (véase, por ejemplo, Vail, 1991; Wilmsen y McAllister, 1996)? ¿Y qué decir de las organizaciones misioneras internacionales, sin duda una parte tan importante de la escena africana actual, como siempre, pero extrañamente, relegadas al pasado colonial en muchos estudios africanistas? Estas cosas encajan incómodamente en la cuadrícula "Estado" frente a "sociedad civil" y, de hecho, ni siquiera pueden etiquetarse de manera coherente como fenómenos "locales", "nacionales" o "internacionales". Por el contrario, cada uno de estos ejemplos, como muchas otras cosas de interés en el África contemporánea, encarna a la vez una importante dinámica local y es indiscutiblemente producto y expresión de poderosas fuerzas nacionales, regionales y mundiales.

El Estado, mientras tanto, cuando se captura empírica y etnográficamente, empieza a parecerse de modo sospechoso a la "sociedad civil". Esto puede ser literalmente así, como cuando los funcionarios del gobierno se benefician y lucran utilizando su capital educativo e institucional para crear (y obtener recursos mediante) sus propias organizaciones "de base". (Como dijo un informante zambiano: "¿Una ONG? Eso no es más que un burócrata con su propio membrete"). Más profundamente, como ha argumentado Timothy Mitchell, la propia concepción del "Estado" como un conjunto de estructuras cosificadas e incorpóreas es un *efecto* de las propias prácticas estatales (1991). En lugar de oponer el Estado a algo llamado "sociedad", necesitamos considerar a los Estados como compuestos en sí mismos de conjuntos de prácticas sociales, tan locales en su materialidad y situación social como cualquier otro (Gupta, 1995).

Romper aquí con la división convencional en niveles analíticos verticales de Estado y sociedad es ir más allá del abanico de cuestiones que impone dicha división (cómo gobiernan los Estados, qué relaciones existen —o deberían existir— entre el Estado y la sociedad, cómo puede la sociedad civil obtener margen de maniobra del Estado, etc.), y hacer visibles algunas

de las relaciones transnacionales que —sugerimos— son cruciales para comprender tanto la supuesta "cima" de la imagen vertical (el Estado) como el "fondo" (las organizaciones voluntarias "de base").

El Estado

Si, como sugieren algunos teóricos neoliberales del Estado y la sociedad, la dominación tiene sus raíces en el poder del Estado, entonces hacer retroceder el poder del Estado conduce naturalmente a una mayor libertad y, en última instancia, a la "democratización". Pero el argumento resulta falaz si se observa que en África y otros lugares la dominación ha sido ejercida durante mucho tiempo por entidades distintas del Estado. Zambia, por referir un ejemplo, fue colonizada originalmente (hace poco más de cien años) por la Compañía Británica de Sudáfrica y no por algún Gobierno; se trató de una corporación multinacional privada dirigida por Cecil Rhodes. Equipada con su propio ejército y actuando bajo los términos de una "concesión" británica, fue esta corporación privada la que conquistó y "pacificó" el territorio, y estableció el sistema de propiedad privada y privilegio racial que se convirtió en el sistema colonial. Hoy en día, Zambia (como la mayoría de las demás naciones africanas) sigue siendo gobernada, en parte significativa, por organizaciones transnacionales que no son en sí mismas Gobiernos, sino que trabajan en conjunto con poderosos Estados del primer mundo dentro de un sistema global de Estados nación que Frederick Cooper ha calificado como "imperialismo internacionalizado".[25]

Quizá lo que más se conoce es que organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, junto con bancos aliados y Gobiernos del primer mundo, imponen hoy en día, de manera directa, políticas a los Estados africanos. El nombre de este proceso en los últimos años ha sido "ajuste estructural", y ha sido posible tanto por la debilidad fiscal general de los Estados africanos como por la presión más específica creada por la crisis de la deuda. La nueva asertividad del FMI ha sido, con cierta justificación, comparada con un proceso de "recolonización", lo que implica una grave

25 Tomamos prestado este evocador término de las observaciones de Cooper (1993). No obstante, cabe señalar que aquí estamos relacionando el término con afirmaciones más amplias sobre la gobernabilidad transnacional que Cooper puede no haber pretendido en su propio uso del término.

erosión de la soberanía de los Estados africanos (Saul, 1993). Hay que señalar que las imposiciones políticas efectuadas por parte de los bancos y las agencias internacionales no solo han implicado intervenciones macroeconómicas tan amplias como la fijación de los tipos de cambio, sino que también han instaurado requisitos bastante detallados para recortar el gasto social, reestructurar las burocracias estatales, etcétera. En otras palabras, aspectos altamente significativos y específicos de la política estatal están siendo formulados de modo directo, para muchos países africanos, en lugares como Nueva York, Londres, Bruselas y Washington.

Como han señalado los críticos, esta "gobernanza" de las economías africanas desde lejos representa una especie de transferencia de la soberanía económica de los Estados africanos a manos del FMI. Sin embargo, dado que son los Gobiernos africanos los que siguen estando nominalmente al mando, es fácil ver que son los primeros en ser culpados cuando las políticas de ajuste estructural empiezan a hacer mella. En ese momento, las elecciones democráticas (otro "ajuste" realizado por los donantes internacionales) proporcionan un medio por el que un Gobierno puede ser sustituido por otro; pero como el Gobierno sucesor se verá sometido a la misma presión financiera que su predecesor, es poco probable que cambien las políticas reales. (De hecho, el FMI y su cártel de capital asociado pueden poner rápidamente de rodillas a cualquier Gobierno que intente imponerse, como ilustra de forma vívida el caso de Zambia). De este modo, las políticas que, de hecho, son elaboradas e impuestas por banqueros internacionales arbitrarios y no elegidos, que no rinden cuentas, pueden presentarse como elegidas de manera democrática por el asentimiento popular. De este modo, la "democratización" sirve irónicamente para simular la legitimidad popular de unas políticas que, de hecho, se hacen de un modo menos democrático que nunca (cf. Ferguson, 1995).

"Las bases"

Hoy en día, la sociedad civil suele aparecer en los estudios africanos como un bullicio de organizaciones locales democráticas de base. Como ha dicho Jane Guyer, lo que esto ignora es justamente "lo obvio: que la sociedad civil

está formada por organizaciones internacionales" (1994: 223). Porque, de hecho, las organizaciones voluntarias locales de África, tan queridas por los teóricos de la sociedad civil, muy a menudo, al inspeccionarlas, resultan estar vinculadas de manera integral a entidades de ámbito nacional y trasnacional. Cabe pensar, por ejemplo, en la miríada de grupos comunitarios sudafricanos financiados por USAID o grupos eclesiásticos europeos (Mayekiso, 1996; Mindry, 1998); o en la profusión de ONG cristianas locales de desarrollo en Zimbabue, que pueden concebirse asimismo como las expresiones más locales y de base de la sociedad civil, o como partes de las vastas organizaciones burocráticas internacionales que las organizan y sostienen (Bornstein, 2001). Cuando dichas organizaciones llegan a asumir las funciones y poderes más básicos del Estado, como hicieron de forma significativa, por ejemplo, en Mozambique (Hanlon, 1991), queda demasiado claro que las ONG no son tan "ONG" como quisieran hacernos creer. De hecho, el Banco Mundial se refiere sin rodeos a lo que ellos denominan BONGO (ONG organizadas por los bancos) e incluso GONGO (ONG organizadas por el Gobierno).

Que estas organizaciones voluntarias vengan tanto de "arriba" (organizaciones internacionales) como de "abajo" (comunidades locales) es un hecho extremadamente revelador sobre la llamada sociedad civil en el África contemporánea. Porque al mismo tiempo que las organizaciones internacionales (mediante el ajuste estructural) erosionan el poder de los Estados africanos (y usurpan su soberanía económica), se dedican a dar vueltas alrededor de estos Estados y a patrocinar de forma directa sus propios programas e intervenciones a través de las ONG en una amplia gama de ámbitos. El papel desempeñado por las ONG a la hora de ayudar a las agencias de desarrollo occidentales a sortear a los Gobiernos nacionales que no cooperan arroja mucha luz sobre el actual desdén por el Estado y la celebración de la sociedad civil que uno encuentra en la actualidad tanto en la literatura académica como en la de desarrollo.

Pero los desafíos actuales para los Estados africanos no solo se encuentran en las organizaciones internacionales y las ONG. A raíz de lo que en general se considera un cierto colapso o retroceso del Estado nación en todo el continente, encontramos por todas partes formas de poder y autoridad que no

han sido bien descritas o analizadas hasta la fecha. Suelen describirse como "subnacionales" y suelen concebirse como esencialmente étnicas (la vieja visión primigenia) o, de manera alternativa (y más esperanzadora), como manifestaciones de una sociedad civil recién resurgida, reprimida durante mucho tiempo por un Estado de mano dura. Sin embargo, ¿podemos suponer en realidad que las nuevas formas políticas que desafían la hegemonía de los Estados nación africanos están necesariamente bien concebidas como "locales", "de base", "civiles" o incluso "subnacionales"?

Las insurrecciones guerrilleras, por ejemplo, poco o nada famosas por su civismo, no suelen ser estrictamente locales o subnacionales, ni tampoco armadas y financiadas desde el extranjero, como suele suceder. Consideremos el movimiento Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) de Savimbi en Angola: ayudado durante mucho tiempo por la CIA, entrenado originalmente por el Gobierno chino, con años de apoyo militar y logístico de la Sudáfrica del *Apartheid*, y financiado por fuentes que van desde el comercio internacional de diamantes hasta donaciones de grupos eclesiásticos estadounidenses. ¿Se trata de una organización subnacional? ¿Un fenómeno de una sociedad civil emergente? O pensemos en las formas de delincuencia transnacional altamente organizada que tan a menudo existen en una asociación tan simbiótica con el Estado que incluso podemos llegar a hablar —como han sugerido Bayart *et al*. (1999)— de "la criminalización del Estado" en muchas partes de África. ¿Pueden comprenderse estos desarrollos dentro de las polaridades Estado-sociedad o local-global? ¿Qué ocurre con las organizaciones cristianas transnacionales como World Vision International, que desempeñan un enorme papel en muchas partes del África contemporánea, organizando asuntos locales, construyendo y operando escuelas y clínicas allí donde los Estados no han podido hacerlo (Bornstein, 2001)? ¿Deben concebirse como "locales" estas gigantescas organizaciones trasnacionales? ¿Qué ocurre con organizaciones humanitarias como Oxfam, Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) o Médicos sin Fronteras, que desempeñan funciones similares a las de los Estados en toda África?

Dichas organizaciones no son Estados, pero son sin duda similares a los Estados en algunos aspectos. Sin embargo, no están bien descritas como

subnacionales, nacionales o incluso supranacionales. Ignoran la lógica de construcción nacional del antiguo Estado desarrollista, que pretendía vincular a sus ciudadanos a una red nacional universalista (cf. Scott, 1998) y, en su lugar, se basan en las formas rápidas y desterritorializadas de conexión (y desconexión) punto a punto que son fundamentales tanto para las nuevas tecnologías de la comunicación como para las nuevas prácticas neoliberales de movilidad del capital (Ferguson, 1999; 2001). Locales y globales al mismo tiempo, dichas entidades son transnacionales —incluso, en cierto modo, anacionales—; no pueden ubicarse dentro de la división vertical de niveles analíticos presentada antes. No es casualidad que estas organizaciones y movimientos que quedan fuera del esquema de los niveles analíticos sean también poco estudiados; de hecho, hasta hace poco han sido en gran medida invisibles en los estudios teóricos sobre la política africana, tendiendo a ser relegados en su lugar a estudios "aplicados", orientados a los problemas.

En todos estos casos, se trata de entidades políticas que pueden ser mejor conceptuadas no como "por debajo" del Estado, sino como partes integrantes de un aparato transnacional de gobernabilidad. Este aparato no sustituye al antiguo sistema de Estados nación (que —seamos claros— no está a punto de desaparecer), sino que se superpone a él y coexiste con él. Desde esta óptica, podría tener sentido pensar en las nuevas organizaciones que han surgido en los últimos años no como desafiantes que presionan al Estado desde abajo, sino como contemporáneas horizontales de los órganos del Estado: a veces rivales; a veces servidores; a veces perros guardianes; a veces parásitos; pero en todos los casos operando al mismo nivel y en el mismo espacio global.

La implicación no es solo que sea importante estudiar las ONG y otras organizaciones no estatales transnacionales, ni siquiera rastrear sus interrelaciones y zonas de contacto con el Estado. Más bien, la implicación es que es necesario tratar la gobernabilidad estatal y no estatal dentro de un marco común, sin hacer suposiciones injustificadas sobre su alcance espacial, altura vertical o relación con lo local. Al considerar la verticalidad y el englobamiento de los Estados no como un hecho dado por sentado, sino como un logro precario, se hace posible plantear la cuestión de la espacialidad de las prácticas contemporáneas de gobierno como un problema etnográfico.

Conclusión: hacia una etnografía de la gobernabilidad neoliberal

Estudiar la relación entre los Estados, el espacio y la escala abre un enorme proyecto empírico y etnográfico que no se ha perseguido sistemáticamente en el análisis antropológico. En este artículo hemos hecho hincapié en dos rasgos centrales de la espacialización estatal, *la verticalidad* y el *englobamiento.* Estas imágenes del espacio y la escala no son "meras" metáforas. Lo que confiere a la verticalidad y al englobamiento su eficacia como rasgos comunes de los Estados es su incrustación en un sinfín de prácticas burocráticas mundanas, como demuestran los ejemplos del programa ICDS en la India. En lugar de entender el espacio como un contenedor preexistente y la escala como una característica natural del mundo en el que operan los Estados, hemos argumentado que los propios Estados *producen* jerarquías espaciales y escalares. De hecho, la producción de estas jerarquías no es incidental, sino central para el funcionamiento de los Estados; son la razón de ser de los Estados. Podría merecer la pena releer el registro etnográfico para reinterpretar los datos relativos a cómo se han legitimado y fundamentado las pretensiones estatales de verticalidad y englobamiento en la vida cotidiana en una multiplicidad de situaciones empíricas en todo el mundo (aunque es muy posible que los datos sean demasiado escasos en muchos casos como para llevar a cabo tal proyecto).

Aunque las *ideologías* espaciales y escalares de los Estados siempre han estado abiertas a la crítica, las nuevas prácticas asociadas a la globalización neoliberal han abierto oportunidades para un cuestionamiento más profundo. En un orden global en el que la organización del capitalismo coexistía más fácilmente con la hegemonía de los Estados nación, los proyectos estatistas de verticalidad y englobamiento parecían "naturales" y solían incorporarse de manera fácil a las rutinas cotidianas de la vida social. Sin embargo, los conflictos engendrados por la globalización neoliberal han sacado a la luz la disyuntiva entre los ámbitos espacial y escalar, revelando el carácter profundamente trasnacional tanto del "Estado" como de lo "local", y llamando la atención sobre los mecanismos cruciales de la gobernabilidad que tienen lugar fuera del Estado nación y junto a él. Las pretensiones de verticalidad que a lo largo de la historia

han sido monopolizadas por el Estado (pretensiones de alcance espacial superior, supremacía en una jerarquía de poder y mayor generalidad de intereses y propósitos morales) están siendo desafiadas y socavadas por un "local" transnacionalizado que fusiona lo popular y lo global de formas que hacen trizas la topografía vertical del poder de la que ha dependido durante tanto tiempo la legitimación de los Estados nación. Cada vez más, las pretensiones estatales de englobamiento se ven enfrentadas y contrarrestadas por organizaciones y movimientos conectados en red y con una imagen global, manifestaciones de "lo local" que pueden reclamar (en su calidad de "guardianes del planeta" ecológicos, protectores indígenas de "los pulmones de la tierra" o participantes en una lucha universal por los derechos humanos) un ámbito espacial y moral más amplio que el del Estado meramente nacional.

No pretendemos sugerir que estos actores locales transnacionalizados siempre alcanzan el triunfo en sus luchas, o que los Estados nacionales se hayan vuelto incapaces de ejercer su autoridad sobre las localidades. Tampoco pretendemos insinuar que las nuevas dificultades de los Estados para espacializar su autoridad vayan a marcar el comienzo de una nueva era de ilustración y mayor bien público. (Al contrario, es tan probable que la disminución de la autoridad estatal socave la posición de los grupos subalternos y que la mejore, como demuestra en particular la reciente historia política de gran parte de África). Que las pretensiones estatales de englobamiento vertical sean hoy cada vez más precarias no significa que ya no existan; como hemos demostrado, el englobamiento vertical sigue estando poderosamente institucionalizado e instaurado en las prácticas cotidianas. Si la naturaleza de estas instituciones y los lugares de esta práctica se están transformando, es justo a estas transformaciones a las que debemos atender en nuestras investigaciones empíricas.

Lo que se necesita, por tanto, no es solo estudiar más o mejor las "interacciones Estado-sociedad"; plantear las cosas de este modo sería asumir la propia oposición que reclama ser interrogada. Más bien, se necesita de una etnografía de la inclusión, un enfoque que adopte como problema central la comprensión de los procesos mediante los cuales la gobernabilidad (por parte de actores estatales y no estatales) se legitima y se subestima por referencia a reivindicaciones

de un alcance espacial y una altura vertical superiores. De hecho, centrarse en la gobernabilidad pone en tela de juicio la propia distinción en la que insiste el término *organización no gubernamental*, haciendo hincapié, en cambio, en las similitudes de las tecnologías de gobierno en todos los ámbitos.

Una etnografía de la espacialidad de la gobernabilidad tiene que enfrentarse a varios problemas. En primer lugar, tal como la formuló originalmente Foucault (1991), la "gobernabilidad" como forma de poder ejercido sobre las poblaciones asume el marco del Estado nación. Ampliar este concepto para dar cuenta de la globalización neoliberal nos obliga a reformular los supuestos espaciales y escalares de la gobernabilidad.[26] Por ejemplo, no podemos limitarnos a pensar en la gobernabilidad transnacional como una forma de gobierno global, un super-Estado que se superpone a varios Estados nación del mismo modo que la Unión Europea lo hace a sus miembros. Las instituciones de la gobernanza mundial no se limitan a reproducir a mayor escala las funciones y tareas del Estado nación, como suelen suponer tanto los defensores como los detractores de la gobernabilidad transnacional. La verticalidad y el englobamiento siguen produciéndose, pero no de la misma manera por parte de las mismas instituciones o grupos. Los grupos "de base" globalizados y las organizaciones no gubernamentales son buenos ejemplos de cómo las escalas se han colapsado entre sí. Neil Smith ha intentado comprender este fenómeno de la "conexión social y política activa de escalas aparentemente diferentes" (1992: 66) refiriéndose a dichas actividades en términos de "salto de escalas" John Ruggie (1993) ha intentado comprender la reconfiguración de la soberanía territorial en el sistema mundial como la formación de un "espacio desagregado" en el que la nación y el Estado no son homólogos en su control y regulación del territorio. Otras formas de producción espacial y escalar se están imponiendo claramente a la espacialidad y territorialidad estatales (Brenner, 1997; Storper, 1997; Swyngedouw, 1997). Al mismo tiempo, diferentes instituciones y organizaciones, incluidos los Estados nación y las metástasis como la Unión Europea, están intentando reinstaurar la verticalidad y el englobamiento en territorios que no son

26 Sally Merry (2001) ha desarrollado la idea de "gobernabilidad espacial" para llamar la atención sobre las formas de gobernabilidad que pretenden regular de forma indirecta a las personas por medio del control y la regulación del espacio.

necesariamente contiguos ni están unidos en las esferas cultural, política y económica. El reto etnográfico al que nos enfrenta hoy la globalización neoliberal es comprender la espacialidad de todas las formas de gobierno, algunas de las cuales pueden estar incrustadas en las prácticas cotidianas de los Estados nación, mientras que otras pueden atravesar o superponerse a la jurisdicción territorial de estos.

Un enfoque de este tipo podría abrir un conjunto de preguntas mucho más ricas sobre el significado del transnacionalismo que las que se han planteado hasta ahora. No se trata de si una economía política globalizadora está haciendo débiles e irrelevantes a los Estados nación, como han sugerido algunos, o de si los Estados siguen siendo los pilares cruciales del sistema mundial, como otros han refutado. El efecto central de las nuevas formas de gobernabilidad transnacional no es debilitar (o fortalecer) a los Estados, sino reconfigurar las capacidades de los Estados para espacializar su autoridad y reivindicar sus pretensiones de generalidad y universalidad. El reconocimiento de este proceso podría abrir una nueva línea de investigación en el estudio de la gobernabilidad en el mundo contemporáneo.

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a Rozita Dimova por su ayuda en la investigación. Cuando se revisó este artículo, Akhil Gupta era becario del Centro Nacional de Humanidades, y James Ferguson era becario del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento. Agradecemos plenamente el apoyo de ambas instituciones.

Referencias

Anagnost, A. 1997. *National past times: narrative, representation, and power in modern China*. Duke University Press.

Anderson, B. R. 1991. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

Bayart, J.-F. 1993. *The state in Africa: the politics of the belly*. Longman. (Publicación original, 1989).

Bayart, J.-F., S. Ellis y B. Hibou. 1999. *The criminalization of the state in Africa*. Indiana University Press.

Barry, A., T. Osborne y N. Rose. 1996. *Foucault and political reason: liberalism, neo-liberalism and rationalities of government*. University of Chicago Press.

Bernal, V. 1997. Colonial moral economy and the discipline of development: the Gezira scheme. *Cultural Anthropology*, *12*(4), 447-479.

Bornstein, E. 2001. *The good life: religious NCOs and the moral politics of economic development in Zimbabwe* [Tesis de doctorado, University of California, Irvine].

Brenner, N. 1997. *Global, fragmented, hierarchical: Henri Lefebvre's geographies of globalization*. *Public Culture*, *10*(1), 135-167.

Burchell, G. 1991. Peculiar interests: civil society and governing "The system of natural liberty." En G. Burchell, C. Gordon y P. Miller (eds.). *In the Foucault effect: studies in governmentality* (119-150). University of Chicago Press.

Burchell, G. 1996. Liberal government and techniques of the self. En A. Barry, T. Osborne y N. Rose (eds.). *Foucault and political reason: liberalism, neo-liberalism and rationalities of government* (19-36). University of Chicago Press.

Burchell, G., C. Gordon y P. Miller. 1991. *The Foucault effect: studies in governmentality*. University of Chicago Press.

Calhoun, C. 1992. *Habermas and the public sphere*. MIT Press.

Chabal, P. y J.-P. Daloz. 1999. *Africa works: disorders political instrument*. Indiana University Press.

Chatterjee, P. 1990. A response to Taylor's "Modes of civil society". *Public Culture*, *3*(1), 119-132.

Chavez, L. R. 1998 *Shadowed lives: undocumented immigrants in American society*. Harcourt Brace College Publishers.

Cohen, J. L. y A. Arato. 1992. *Civil society and political theory*. MIT Press.

Cohn, B. S. 1996. *Colonialism and its forms of knowledge*. Princeton University Press.

Comaroff, J. L. 1998. Reflections on the colonial state, in South Africa and elsewhere: factions, fragments, facts and fictions. *Social Identities*, *4*(3). 321-361.

Comaroff, J. L. y J. Comaroff. 1999. *Civil society and the political imagination in Africa*. University of Chicago Press.

Cooper, F. 1993. *Historicizing development*. Emory University.

Coronil, F. 1997. *The magical state: nature, money, and modernity in Venezuela*. University of Chicago Press.

Corrigan, P. y D. Sayer. 1985. *The great arch: English state formation as cultural revolution*. Basil Blackwell.

Darian-Smith, E. 1999a. *Bridging divides: the channel and English legal identity in the new Europe*. California University Press.

Dean, M. 1999. *Governmentality: power and rule in modern society*. Sage Publications.

Fallers, L. A. 1971. *The social anthropology of the nation-state*. Aldine.

Ferguson, K. E. 1984. *The feminist case against bureaucracy*. University of Pennsylvania Press.

Ferguson, J. (en prensa). Transnational topographies of power: beyond "the state" and "civil society" in the study of African politics. En G. Schwab (ed.). *The forces of globalization*. Columbia University Press.

Ferguson, J. 1995. "From African socialism to scientific capitalism: reflections on the legitimation crisis in IMF-ruled Africa". En D. Moore

y G. Schmitz (eds.). *Debating development discourse: popular and institutionalist perspectives* (129-148). St. Martins Press.

Ferguson, J. 1999. *Expectations of modernity: myths and meanings of urban life on the Zambian copperbelt*. University of California Press.

Ferguson, J. 2001. Global disconnect: abjection and the aftermath of modernism. En J. J. Inda y R. Rosaldo (eds.). *The anthropology of globalization* (136-153). Blackwell.

Foucault, M. 1991. Governmentality. En G. Burchell, C. Gordon y P. Miller (eds.). *The Foucault effect: studies in governmentality* (87-104). University of Chicago Press.

Geertz, C. 1980. *Negara: the theatre state in nineteenth century Bali*. Princeton University Press.

Grant, B. 1995. *In the Soviet house of culture: a century of perestroikas*. Princeton University Press.

Gupta, A. 1995. "Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state". *American Ethnologist*, *22*(2), 375-402.

Gupta, A. y J. Ferguson. 1997. *Culture, power, place: explorations in critical anthropology*. Duke University Press.

Guyer, J. 1994. The spatial dimensions of civil society in Africa: an anthropologist looks at Nigeria. En J. W. Harbeson, D. Rotchild y N. Chazan (eds.). *Civil society and the state in Africa* (215-230). Lynne Rienner Publishers.

Hanlon, J. 1991. *Mozambique: who calls the shots?* Indiana University Press.

Harbeson, J. W., D. Rothchild y N. Chazan. 1994. *Civil society and the state in Africa*. Lynne Rienner Publishers.

Harvey, D. 1985a. *Consciousness and the urban experience: studies in the history and theory of capitalist urbanization*. Johns Hopkins University Press.

Harvey, D. 1985b. *The urbanization of capital: studies in the history and theory of capitalist urbanization*. John Hopkins University Press.

Harvey, D. 1990. *The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change*. Blackwell.

Hegel, G. W. F. 1942. *Philosophy of right*. Trad. de Thomas Malcolm Knox. Clarendon Press. (Publicación original, 1821).

Herzfeld, M. 1991. *A place of history: social and monumental time in a Cretan town*. Princeton University Press.

Heyman, Josiah McC. 1998. "State Escalation of Force: A Vietnam/U.S.-Mexico Border Analogy." En *State and Illegal Practices*, editado por Josiah McC. Heyman, 285–314. Oxford: Berg.

Joseph, G. M. y D. Nugent. 1994. *Everyday forms of state formation: revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Duke University Press.

Lefebvre, H. 1991. *The production of space*. Blackwell.

Mamdani, M. 1996. *Citizen and subject: contemporary Africa and the legacy of late colonialism*. Princeton University Press.

Massey, D. 1984. *Spatial divisions of labour: social structures and the geography of production*. Macmillan.

Massey, D. 1994. *Space, place and gender*. Polity.

Maurer, B. 1998. *Recharting the Caribbean: land, law, and citizenship in the British Virgin Islands*. The University of Michigan Press.

Mayekiso, M. 1996. *Township politics: civic struggles for a new South Africa*. Monthly Review Press.

Mbembe, A. 1992. The banality of power and the aesthetics of vulgarity in the postcolony. *Public Culture*, *4*(2), 1-30.

Merry, S. E. 2001. Spatial governmentality and the new urban social order: controlling gender violence through law. *American Ethnologist*, *103*(1), 16-29.

Mindry, D. 1998. *"Good women": philanthropy, power, and the politics of femininity in contemporary South Africa* [Tesis de doctorado, University of California, Irvine].

Mitchell, T. 1991. "The limits of the state: beyond statist approaches and their critics". *American Political Science Review*, *85*(1), 77-96.

Nugent, D. 1997. *Modernity at the edge of empire: state, individual, and nation in the Northern Peruvian Andes, 1885-1935*. Stanford University Press.

O'Malley, P. 1998. Indigenous governance. En M. Dean y B. Hindess (eds.). *Governing Australia: studies in contemporary rationalities of government* (pp. 156-172) . Cambridge University Press.

Pateman, C. 1988. *The sexual contract*. Stanford University Press.

Rosaldo, M. Z. 1980. The use and abuse of anthropology: reflections on feminism and cross-cultural understanding. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, *5*(3), 389-417.

Rose, N. 1996. Governing "advanced" liberal democracies". En A. Barry, T. Osborne y N. Rose (eds.). *Foucault and political reason: liberalism, neo-liberalism and rationalities of government* (37-64). University of Chicago Press.

Rose, N. y P. Miller. 1992. Political power beyond the state: problematics of government. *British Journal of Sociology*, *43*(2), 172-205.

Ruggie, J. 1993. Territoriality and beyond: problematizing modernity in international relations. *International Organization*, *47*(1), 139-174.

Sassen, S. 1991. *The global city: New York, London, Tokyo*. Princeton University Press.

Sassen, S. 1996. *Losing control? Sovereignty in an age of globalization*. Columbia University Press.

Sassen, S. 1998. *Globalization and its discontents: essays on the new mobility of people and money*. New Press.

Saul, J. S. 1993. *Recolonization and resistance: Southern Africa in the 1990s*. Africa World Press.

Scott, J. C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale University Press.

Seligman, A. B. 1992. *The idea of civil society*. Princeton University Press.

Smith, N. 1992. Contours of a spatialized politics: homeless vehicles and the production of geographical scale. *Social Text*, *33*, 54-81.

Stallybrass, P. y A. White. 1986. *The politics and poetics of transgression*. Cornell University Press.

Storper, M. 1997. Territories, flows, and hierarchies in the global economy. En K. R. Cox (ed.). *Spaces of globalization: reasserting the power of the local* (19-44). The Guilford Press.

Strathern, M. 1995. *The relation: issues in complexity and scale*. Prickly Pear Press.

Swyngedouw, E. 1997. Neither global nor local: "glocalization" and the politics of scale. En K. R. Cox (ed.). *Spaces of globalization: reasserting the power of the local* (137-166). The Guilford Press.

Taussig, M. 1996. *The magic of the state*. Routledge.

Taylor, C. 1990. Modes of civil society. *Public Culture*, *3*(1), 95-118.

Vail, L. 1991. *The creation of tribalism in Southern Africa*. University of California Press.

Verdery, K. 1996. *What was socialism, and what comes next?* Princeton University Press.

Werbner, R. y T. Ranger. 1996. *Postcolonial identities in Africa*. Zed Books.

Wilmsen, E. N. y P. McAllister. 1996. *The politics of difference: ethnic premises in a world of power*. University of Chicago Press.

Yanagisako, S. J. y J. F. Collier. 1987. Toward a unified analysis of gender and kinship. En J. F. Collier y S. J. Yanagisako (eds.). *Gender and kinship: essays toward a unified analysis* (14-50). Stanford University Press.

12. Ignorancia, conocimiento y poder: el corte de la madera, el tráfico ilegal y las políticas forestales en México*[1]

Andrew S. Mathews

Resumen: Los estereotipos académicos y populares acerca del Estado dan por sentado que el poder oficial y el conocimiento van de la mano. Mediante una etnografía de la dependencia gubernamental mexicana para el ambiente, Semarnap, el autor demuestra que la ignorancia y la complicidad pueden ser tan importantes como el conocimiento cuando se trata de ejercer el poder estatal. La ignorancia oficial en torno a la tala ilegal de leña se presenta dentro y fuera de las instituciones gubernamentales encargadas de la silvicultura. El conocimiento y la ignorancia oficiales justifican el poder estatal y se arraigan gracias a las prácticas cotidianas de los burócratas. Poner una mayor atención a la producción y transmi-

1 Publicado originalmente en Andrew S. Mathews, 2006, "Ignorancia, conocimiento y poder: el corte de la madera, el tráfico ilegal y las políticas forestales en México", *Desacatos*, 21: 135-160. *N de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto pueden no figurar en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen. Con el fin de respetar íntegramente el contenido y la forma del texto de origen, no se ha añadido, modificado ni completado referencias más allá de lo proporcionado por los autores. El artículo resume una parte de mi tesis de doctorado, presentada en la Universidad de Yale en marzo de 2004. La investigación se llevó a cabo en la Ciudad de México y Oaxaca en el verano de 1998, entre abril de 2000 y agosto de 2002, y durante un breve retorno en 2002. Se obtuvo financiamiento de la Universidad de Yale, de la Fundación Switzer y de la Fundación Fulbright/García-Robles. Agradezco a los profesores Michael R. Dove y Enrique Mayer sus comentarios y consejos. Asimismo, doy las gracias a mis colaboradores en la Ciudad de México y a los comuneros de Ixtlán de Juárez, en especial a Leopoldo Santiago Pérez y Gustavo Ramírez Santiago. Mis agradecimientos también para Martín Gómez y Juan Francisco Castellanos, del Inifap en Oaxaca, y a numerosos funcionarios de la Semarnap en Oaxaca y la Ciudad de México. Agradezco también a José Luis Romo, en Chapingo, y a la familia Prieto por su generosa hospitalidad y consejos durante mi estancia en México. Gracias también a dos dictaminadores anónimos que me ayudaron a clarificar mi argumento. Todas las interpretaciones y errores, por supuesto, son de mi entera responsabilidad y en modo alguno reflejan los puntos de vista de mis informantes.

sión del conocimiento en las instituciones gubernamentales conduce a un saber más matizado de las diversas formas de confusión e ignorancia que acompañan las afirmaciones del conocimiento oficial.

Palabras clave: Uso de leña, tala ilegal, Semarnap, bosques, conocimiento, ignorancia, gobernabilidad.

Abstract: Academic and popular stereotypes of the state have assumed that official power and knowledge go hand in hand. In an institutional ethnography of the Mexican environment agency, Semarnap, the author show that ignorance and complicity may be as important as knowledge in asserting state power. Official ignorance of illegal firewood cutting and logging is deployed both within and outside state forestry institutions.Official knowledge and ignorance justify state power and are entrenched by the daily practices of bureaucrats.A closer attention to the production and translation of knowledge within state institutions leads to a more nuanced understanding of various forms of obscurity and ignorance which accompany official knowledge claims.

Keywords: Firewood use,illegal logging, Semarnap, forests, knowledge, ignorance, governmentality.

> Como todo escritor, medía las virtudes de los otros
> por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran
> por lo que vislumbraba o planeaba.
> (Borges, 1963: 161).

Introducción

Los estudiosos del Estado han venido sosteniendo desde hace tiempo que el poder y el conocimiento se refuerzan de forma mutua. Weber hizo una descripción de cómo el Estado expandió su poder mediante un control creciente de los medios de administración pública racional (Gerth y Mills, 1958; Weber, 1978). Siguiendo los pasos de Weber, Foucault sostiene que el poder del Estado

descansa en el conocimiento:

> La verdad ha de entenderse como un sistema de procedimientos ordenados para la producción, regulación, distribución, circulación y operación de declaraciones […] La verdad establece una relación circular con los sistemas de poder que la producen y sostienen, en aras de servir a los propósitos del poder que la induce y la amplía (Foucault, 1980: 133).

En este trabajo me permito mostrar mi desacuerdo abierto con Foucault y Weber. Sostengo que, con frecuencia, el poder del Estado presupone una ignorancia oficial resguardada con sumo cuidado con el fin de autorizar a los funcionarios a probar que sí saben. Utilizo aquí la discusión acerca de las representaciones públicas de Mary Douglas (1986)[2], y afirmó que las instituciones forestales estatales[3] (el servicio forestal mexicano) usan el conocimiento, por una parte, como una categoría en torno a la cual se definen a sí mismas; y por la otra, se sirven de la ignorancia como una categoría en la que engloban todo lo que se halla fuera del Estado. Hay ocasiones en que los actores estatales y los que no lo son pueden aliarse para ampliar el poder del Estado; y en otras pueden hacerlo para reducirlo, como en el caso descrito por David Nugent acerca de las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad sempiternamente cambiantes en la construcción del poder estatal en el norte de Perú (Nugent, 1994). En estas luchas tácticas de poder entre los funcionarios y la gente que se encuentra de momento fuera del Estado, la frontera entre conocimiento e ignorancia puede, en ocasiones, verse afirmada y fortalecida; y en otras, deliberadamente difuminada. El poder del Estado a veces puede construirse sobre unos límites muy marcados entre este y la sociedad (por ejemplo, cuando

2 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo, representando una supresión de origen del artículo original.

3 Por conveniencia me referiré a las varias instituciones federales responsables del manejo y la protección forestal como el "servicio forestal". En el momento de mi investigación de campo (en 2000-2001), la responsabilidad de los bosques se dividía entre nueve directores generales de la Semarnap y del Instituto Nacional de Ecología (INE). La Comisión Nacional de Biodiversidad se encargaba de ciertos aspectos de la protección de la biodiversidad. Históricamente, el servicio forestal mexicano ha padecido frecuentes reorganizaciones y ha sido transferido a y dividido entre varias entidades federales (Mejía, 1988; Mathews, 2005).

el Estado decide hacer acatar con todo rigor los reglamentos sobre extinción de incendios a fin de controlar a las comunidades agrícolas); en otras ocasiones, los límites suelen ser más porosos en la práctica, aunque no dejen de ser claros conceptualmente (por ejemplo, cuando el Estado se hace de la vista gorda ante la quema y acopio generalizado de leña).Así, el conocimiento y la ignorancia oficiales son fruto de las tácticas locales de poder. El poder limitado del servicio forestal, en lugar de descansar exclusivamente en el conocimiento, se ha basado en un sistema de conocimiento e ignorancia: puede tenerse conocimiento de la ingeniería forestal industrial, pero debe ignorarse el uso de la leña y los incendios provocados; pueden conocerse las políticas forestales actuales, pero deben ignorarse las políticas forestales del pasado (por ejemplo, cuando las políticas de las administraciones pasadas se ven opacadas por acusaciones de corrupción). Esta separación rigurosa de conocimiento e ignorancia no es mantenida mediante algo inherente al conocimiento mismo (como sería el caso de un enfrentamiento entre visiones teóricas diferentes), sino por el poder de las instituciones oficiales para dictar las actividades y las prácticas de producción de conocimiento de los funcionarios del Estado y afectar así su visión del mundo.

Numerosos estudios etnográficos sobre el Estado, siguiendo a Foucault y Abrams (Abrams, 1988; Foucault, 1991; Gordon, 1991), han llegado a la conclusión de que este se halla fracturado y enfrentado a diferentes organismos oficiales que luchan unos con otros (Agrawal y Sivaramakrishnan, 1998; Moore, 1998; Robbins, 2000b). Si bien no niego que las instituciones estatales se encuentren diferenciadas internamente, en un sentido vertical y horizontal, los datos presentados aquí muestran que las instituciones estatales mantienen cierta coherencia a corto y largo plazo. En parte, mi desacuerdo con algunos estudios etnográficos sobre el Estado podría atribuirse a diferencias de perspectiva, inducida esta por la visión a más largo plazo de mi trabajo, en el que la continuidad de las instituciones estatales se vuelve más aparente a medida que las luchas diarias por el poder y los recursos entre los organismos oficiales y dentro de estos acaba por resultar menos relevantes. En mi opinión, la coherencia y la continuidad de las políticas estatales se mantienen por medio del poder

de los funcionarios y los políticos de alto nivel para controlar el discurso oficial y el conocimiento/ignorancia.

En el caso del servicio forestal, se ha mantenido un grado elevado de inestabilidad institucional aunado a una enorme estabilidad discursiva. Esta última ha aportado un recurso esencial a los funcionarios para manejar la inestabilidad personal e institucional. Sumados a los controles estrictos del discurso formal, los funcionarios de los diferentes niveles se ven obligados a establecer pactos políticos informales y modificaciones de las políticas oficiales. Dos de esos pactos son la decisión de los funcionarios forestales de Oaxaca de ignorar el uso de la leña y los nuevos reglamentos de control de incendios. Otro pacto político de largo plazo por parte del servicio forestal ha sido el de garantizar al sector transformador de la madera un suministro confiable de materia prima. En cada caso, los pactos políticos se apoyan en normas informales que permiten a los grupos de presión de toda laya negociar con los funcionarios y estar relativamente seguros de que cualquier acuerdo al que lleguen será respetado.

La descripción de la burocracia racional-legal (Weber, 1978; 217-226; 956-1005) ha ejercido una gran influencia en los estudios sobre la administración estatal, al grado de que las burocracias de los países en vías de desarrollo con frecuencia han sido descritas como reproducciones descuidadas o imperfectas de la burocracia weberiana, debido a errores de aplicación como la corrupción oficial o la falta de recursos. Como señaló James Scott hacia 1969, este enfoque resulta inadecuado porque compara las sociedades subdesarrolladas con las historias pretéritas de las sociedades desarrolladas en lugar de analizar el funcionamiento actual de las burocracias tercermundistas en sus propios términos (Scott, 1969). Muchos de los ingenieros forestales mexicanos con quienes me entrevisté en 2000-2001 expresaron críticas al servicio forestal nacional por su desacato al ideal racional-legal, el predominio de los políticos sobre los especialistas en bosques y la falta de archivos y continuidad directiva a largo plazo. En su opinión, los fracasos del servicio forestal mexicano se debían a problemas organizativos, a la falta de recursos o a la ausencia de reglas que garantizaran avances profesionales propios. En sus críticas se manifestaba el poderoso mito del desarrollo, la idea de que México se halla

situado en una posición lineal desde la cual va a transitar de un pasado subdesarrollado al estadio moderno y desarrollado del primer mundo. Conforme a esta descripción, la mala administración burocrática es uno de los escollos en el impulso de México "hacia adelante", en dirección a un futuro desarrollado, en el que tendría una administración pública funcionando de manera adecuada.

Los críticos del servicio forestal se han centrado en la brecha enorme que existe entre sus ambiciosos objetivos retóricos de controlar la naturaleza y su éxito limitado en lograrlo (un ejemplo, entre muchos otros, es el de los ingenieros forestales citados por Gumersindo Borgo, 1998). En mi opinión, en lugar de criticar al servicio forestal por su fracaso en cuanto a los ambiciosos objetivos declarados y por su semejanza imperfecta con la burocracia racional-legal de Weber, debe ser examinado como una organización que mantiene una tensión permanente entre las metas retóricas sumamente ambiciosas y las prácticas cotidianas.[4] Así, el servicio forestal mexicano puede considerarse como fruto de la cultura política e institucional del país: las acusaciones generalizadas de corrupción o de buenas intenciones forman parte de esta cultura política, en la que el Estado mexicano es representado como "insuficientemente moderno" o abrumadoramente corrupto.

A lo largo del tiempo, el servicio forestal ha sido una institución débil, debilidad que se ha manifestado en presupuestos inadecuados y en frecuentes reorganizaciones radicales. Esta fragilidad institucional ofrece un marcado contraste con la notable estabilidad de la ideología institucional respecto al control de los recursos naturales. La coherencia de esta ideología en los últimos ochenta años confirma que se halla a salvo de cualquier evidencia empírica capaz de demostrar que anda descarriada o es inapropiada para los fines que persigue.

A diferencia de los numerosos críticos del servicio forestal mexicano que lo han acusado de titubeos o incapacidad para mantener una política

4 Visto así, el servicio forestal mexicano guarda una estrecha semejanza con los proyectos de desarrollo modernos: metas ambiciosas de transformación social, con bajo presupuesto y escaso tiempo para lograr sus fines.

firme, creo que, a pesar de sus numerosas vicisitudes, ha sido notablemente consistente en su ideología y retórica. Entre la primera ley forestal moderna de 1926 y la ley más reciente de 1997, se ha encargado de la prevención de incendios de bosques y de controlar o impedir el pastoreo en estos, así como de deslindar la agricultura de la selvicultura, de aplicar la ciencia forestal a los bosques "desordenados" y de regular el acceso a los bosques mediante un elaborado sistema de documentos y regulaciones. Si bien las limitaciones de personal han desempeñado un papel en la insuficiente capacidad del servicio forestal para llevar a la práctica su ideología acerca de los recursos naturales, la experiencia de servicios forestales mucho más grandes y mejor dotados desde el punto de vista presupuestal, como los de la India y Pakistán (Saberwal, 1997; Robbins, 2000a), indica que las limitaciones de personal por sí solas no explican la estabilidad de la ideología oficial ante reiterados fracasos. No conviene considerar la persistencia de una ideología coherente sobre el uso de los recursos naturales como fruto de la incapacidad de recopilar información que provocaría cambios en las ideologías oficiales, sino como la necesidad de mantener una tensión permanente entre las ideologías de control de los recursos naturales y las prácticas cotidianas de los funcionarios forestales. Continuamente se genera y se expone de manera modificada una ideología oficial en las oficinas del servicio en la Ciudad de México. Los ingenieros forestales que trabajan en el campo tienen permitido negociar la tensión entre la ideología oficial y las prácticas locales aceptando excepciones, pero estas excepciones locales rara vez son documentadas y no ponen en tela de juicio el estatus de las regulaciones nacionales y los pronunciamientos oficiales.

Un problema clave para interpretar las descripciones retrospectivas de la historia del servicio forestal mexicano que expresan los ingenieros forestales y funcionarios estriba en la tendencia a juzgar el servicio forestal conforme a los fracasos sufridos por no estar a la altura de su retórica, expresada en declaraciones públicas y regulaciones, salvo cuando hablan de su propio desempeño, que remontan a una edad de oro juzgada en términos de las limitaciones prácticas que enfrentaron (Hinojosa, 1958; Beltrán, 1964; Borgo, 1998). Así las críticas se convierten en una serie de generalizaciones: el

servicio forestal con frecuencia es valuado como un fracaso total sobre la base de su incapacidad para mantenerse fiel al mundo ideal de la naturaleza regulada usado para justificar su existencia.

Por el contrario, mantengo que el servicio forestal ha crecido numéricamente, que los programas de manejo se han expandido en detalle y precisión, y que a partir de 1990 se han comenzado a introducir los primeros programas de manejo forestal a largo plazo en las comunidades forestales de todo el país.[5] De igual manera, el servicio forestal tuvo mucho éxito en imponer requisitos sencillos de tala a los aserraderos industrializados entre 1950 y 1982. En lugar de emitir un juicio de éxito o fracaso, defiendo la idea de que el servicio forestal logró un éxito limitado en su creación de un régimen de gestión forestal en los bosques mexicanos y que ejerció una influencia importante en la comprensión popular de los bosques, como veremos en el caso de la tensión entre sus pretensiones retóricas de controlar drásticamente la tala de árboles y su tolerancia de facto de la tala ilegal generalizada. Sin embargo, esta tolerancia ha creado una desconfianza popular en el servicio forestal, una gran ignorancia oficial sobre la localización y el alcance de la tala, y una falta de información científica acerca del impacto ecológico y silvícola de la misma, en específico en lo relativo a la ecología del encino, que es la especie preferida para hacer leña.

5 Antes de los programas de manejo forestal diseñados para las comunidades forestales a finales de la década de los noventa, estos no tomaban en cuenta los impactos de la gestión pasada, lo que contravenía de manera directa las exigencias de los especialistas de manejar los bosques pensando en el largo plazo.



Fuente. Foto de Kaia Huseby. Camión cargado de leña en la Sierra Juárez de Oaxaca, 2001.

El contexto

En 1994 se transfirió la responsabilidad de la gestión y la protección forestal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), de reciente creación y a cargo de la bióloga Julia Carabias. Por primera vez los recursos naturales y el ambiente quedaban bajo el mismo techo ministerial, en un esfuerzo por volver la gestión forestal más sensible a las inquietudes ecológicas. La nueva Secretaría fue creada por el presidente Ernesto Zedillo. El poder político de la Presidencia afectó de forma directa la estabilidad de las instituciones encargadas de la gestión de los recursos naturales y ese sexenio fue el lapso que duró la Semarnap en su forma original. En 2001, la administración de Vicente Fox le quitó la responsabilidad de administrar los programas de subsidio forestal para entregarla a una recién creada Comisión Forestal Nacional (CNF), a cargo del que fuera gobernador de

Jalisco, Alberto Cárdenas.[6] La nueva administración ha buscado por todos los medios distanciarse de las actividades anteriores de la Semarnap, denostando la corrupción del pasado con el fin de dotar a sus propias políticas de mayor credibilidad. Las acusaciones de corrupción se incrementaron tras el cambio de poder del Partido de la Revolución Institucional (PRI) al Partido de Acción Nacional (PAN) en 2000, pero el patrón de acusaciones generalizadas de corrupción contra las administraciones anteriores ha sido un aspecto consistente de la vida política mexicana (Morris, 1991: 83-102), si bien la especificidad y el alcance de las acusaciones han aumentado en administraciones recientes.[7]

En los primeros años de cada sexenio, la nueva administración presidencial trata de presentarse como enteramente diferente del pasado (corrupto) régimen (Morris, 1991). Este posicionamiento retórico tiene lugar no solo en el ámbito nacional, sino también en el local, por ejemplo:

> "Se actuará con todo el rigor de la ley para abatir la corrupción en las instituciones que durante algún tiempo cobijaron los actos ilícitos cometidos en contra de los recursos naturales de México", aseveró ayer Julia Carabias Lilo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) (Castillo, 1996).

El aserto de que la administración anterior fue corrupta establece una frontera conceptual que define a la nueva institución en el tiempo, difumina la continuidad del pasado con el presente y garantiza que las políticas forestales pretéritas no sean analizadas de manera sistemática. La acusación de corrupción afirma la estabilidad de la nueva organización (en este caso Semarnap), ocultando lo que realmente sucedió en el pasado. Por añadidura, al atribuir la culpa de los fracasos pasados a la corrupción

6 La responsabilidad de la pesca se transfirió a la Secretaría de Agricultura, tras lo cual el nombre de Semarnap se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

7 Mucha gente tenía la esperanza de que la nueva administración de Vicente Fox procesara a antiguos funcionarios. Hasta la fecha no ha sucedido así, tal vez debido a la falta de una mayoría parlamentaria para respaldar la legislación y la consiguiente necesidad de contar con el apoyo del PRI. El caso es que Fox ha mostrado escaso interés en aplicar la ley a los antiguos funcionarios. (Texto y nota escritos durante el gobierno de Vicente Fox, 2000-2006. N. del E.).

personal y no a factores políticos y económicos sistémicos, la acusación de corrupción refuerza de hecho la legitimidad de la administración en el poder. La ignorancia del pasado es un recurso valioso que fortalece a la administración en el poder, de modo similar a las organizaciones de desarrollo indonesias que tienden de forma activa una cortina de humo sobre el presente (Van Ufford, 1993). Los individuos pueden ser muy conscientes de que las administraciones pasadas no fueron sistemáticamente corruptas, y a menudo están familiarizados a la perfección con los detalles de las políticas y la legislación anteriores. Empero, en lo tocante al conocimiento oficial, las barreras ideológicas construidas por la ignorancia institucional respecto al pasado se ven reforzadas aún más por medio de las prácticas sociales que reorganizan o refundan el servicio forestal en cada sucesiva administración. Como señala Mary Douglas, "las instituciones crean lugares nebulosos en que nada se ve ni nada se pregunta" (Douglas, 1986: 69)[8]; la "historia oficial" truncada de cada institución forestal durante los sucesivos Gobiernos dificulta la tarea de hacer preguntas detalladas acerca de las instituciones forestales del pasado.[9] El mapeo de las instituciones en categorías vuelve a estas últimas sumamente poderosas: las instituciones controlan las prácticas sociales y estas prácticas afianzan la comprensión de estas categorías entre los funcionarios y el público. Como afirma Bourdieu:

> Por medio del marco que impone a las prácticas, el Estado establece e inculca formas y categorías comunes de percepción y apreciación, marcos sociales de percepciones, entendimientos o memoria, en suma, formas estatales de clasificación (Bourdieu, 1994: 54).

8 N. de T. La obra citada no figura en la lista de referencias del artículo, lo que constituye una supresión presente en el texto original.

9 El truncamiento de las genealogías históricas por razones políticas ha sido objeto de interés por parte de los antropólogos desde el trabajo de Evans-Pritchard sobre el uso de los sistemas de linaje entre los nuers (Evans-Pritchard, 1940), hasta la observación más reciente de Benedict Anderson de que la creación de una memoria nacional compartida requiere, asimismo, de un olvido compartido de acontecimientos divisivos (Anderson, 1991).

De este modo, la creación de la nueva Semarnap fortaleció la frontera trazada con la corrupción del pasado. Una vez que se ha hecho el mapeo de las instituciones y las concepciones, pueden surtir efectos notables en la capacidad de la gente dentro de las instituciones para detectar qué pasa fuera del organismo, independientemente de que ese "afuera" se refiera al tiempo o al espacio.

La estructura y la cultura institucional del servicio forestal

La Semarnap era una organización de proporciones formidables, con un total de 37 000 empleados, de los cuales unos 200 o 300 eran profesionales del ramo forestal.[10] La responsabilidad de los bosques se distribuía entre nueve direcciones generales, incluidas la de Vida Silvestre, Impacto Ambiental, Bosques y Recursos Renovables (Semarnap, 2001; Semarnat, 2002)[11]. La mayoría de las funciones relacionadas con la explotación y administración forestal se concentraba en un conjunto de edificios de dos pisos en los Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, un área de parques y tres viveros donados a la nación por Miguel Ángel de Quevedo en la década de los veinte.

Inestabilidad institucional y carrera

Hasta el año 2000, el presidente de México era elegido en secreto por el presidente saliente, quien revelaba el nombre del ungido a un pequeño grupo de funcionarios priistas de alto nivel, que de inmediato hacía del conocimiento de la prensa ("destape") el nombre del candidato. Antes del "destape", los funcionarios/políticos de alto nivel trataban de formar alianzas con el candidato que consideraban idóneo, pero, al mismo tiempo, se esforzaban en lo posible por evitar un compromiso demasiado abierto, que inevitablemente se traduciría en la imposibilidad de acceso a un buen cargo en caso de que fracasara su candidato. Esta política de alto nivel

10 Había, entre otros especialistas, biólogos, ingenieros agrícolas, abogados, etcétera.

11 N. de T. Se advierte una discrepancia entre las fechas consignadas en estas citas y la registrada en la lista de referencias bibliográficas.

surtía un efecto en cascada en los niveles más bajos de la burocracia: al inicio de cada sexenio quedaban sin trabajo miles de funcionarios en el ámbito nacional y local[12] (Grindle, 1977), y se nombraba a otros nuevos en su lugar. A menudo se creaban nuevos programas o secretarías, lo que ocasionaba aún más incertidumbre a medida que los funcionarios pugnaban por encontrar acomodo. Por otra parte, esta inestabilidad era en definitiva más fuerte al inicio y al final de cada sexenio: una vez que habían conseguido un puesto, los empleados del gobierno se encontraban relativamente seguros por el resto del sexenio mientras no cometieran errores más crasos.

Un efecto característico de la inestabilidad institucional de México en comparación con otros países en desarrollo es que los funcionarios no solo pueden ser transferidos a otra área dentro de la misma administración (como en el caso de los funcionarios de riego de la India descritos por Robert Chambers [1988]), sino que también pueden ser bajados de rango, movidos a otra dependencia del gobierno u obligados a dejar el empleo gubernamental, quizá para regresar en otro sexenio. La cantidad de funcionarios que perdían sus puestos era numerosa. En 1964 se estimó que más de 43 000 funcionarios y políticos se vieron obligados a dejar sus puestos (Grindle, 1977: 42). Por lo menos en el campo forestal parece que estos despidos masivos de altos funcionarios han continuado hasta la fecha: en 2001 mis interlocutores de la Semarnap en Oaxaca y el D. F. calculaban que más de 75% de los funcionarios altos de esta Secretaría dejó su cargo al final de la administración de Zedillo. A nivel estatal, la situación no era tan clara, pero existía mucho temor entre los funcionarios de bajo rango de perder sus puestos de trabajo.

Un segundo rasgo del sistema político mexicano ha sido la gran opacidad prevaleciente en los cargos políticos y administrativos de alto nivel

12 La inestabilidad en el puesto impera, asimismo, en los estados. No obstante, para los fines de este trabajo sólo abordaremos las instituciones federales debido a que los asuntos forestales son de incumbencia federal y a que la parte del león del gasto gubernamental se halla bajo control del Gobierno federal. En este contexto, la promesa del Gobierno de Fox de "eliminar para siempre la mayoría de los puestos burocráticos en todos los niveles del Gobierno federal" forma parte de una tradición venerable de reorganización administrativa y de retórica oficial (Guillermo, 2001).

y la ausencia de un servicio civil profesional permanente para los burócratas de carrera. La Constitución de México prohíbe la reelección de los políticos en todos los niveles, de modo que después de tres o seis años se ven obligados a buscar puestos en los que son nombrados a dedo. Esto ha llevado a que las figuras políticas y administrativas pasen de un puesto de elección popular a uno de nombramiento (en las burocracias estatales o en empresas paraestatales, y a cargos académicos), (Smith, 1979). A partir de la década de los setenta los administradores con entrenamiento técnico han ido ganando paulatinamente el control de los puestos más altos, aduciendo que dicha formación es necesaria para la administración pública (Lomnitz *et al*., 1983). La vieja élite administrativa legal/política formada en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido gradualmente desplazada por una nueva élite tecnocrática, buena parte de la cual posee estudios de posgrado en universidades de Europa o de Estados Unidos. No obstante, los cargos de alto nivel continúan siendo nombramientos políticos: además de obtener posgrados, los funcionarios altos están obligados a establecer alianzas políticas. Julia Carabias presentaba una larga trayectoria de activismo político en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y luego trabajó con Luis Donaldo Colosio (candidato del PRI a la presidencia en 1994). En el presente las principales figuras de Semarnat también son políticos.

Las relaciones necesarias para formar un equipo a menudo se forjan en los años universitarios; así, la asistencia a la UNAM (en el caso de los biólogos) o a Chapingo (en el caso de los ingenieros forestales) es clave para conectarse con los actores políticos que les permitirán construir una carrera administrativa de alto nivel. Para los aspirantes a funcionarios, es importante el éxito académico en las instituciones mencionadas, como lo es la habilidad para forjar alianzas políticas con profesores que los ayuden a conseguir becas para estudiar en el extranjero (Lomnitz *et al*., 1983).

Las relaciones patrón-cliente[13] son insoslayables para armar una carrera exitosa: en mis entrevistas con funcionarios forestales siempre les solicitaba un resumen de su carrera: dónde habían estudiado y cómo habían conseguido su puesto actual.

Sin excepción, me confesaban cómo habían llegado a su cargo. En general habían conocido a su superior en determinado proyecto, oficina de gobierno o empresa privada, e incluso en la universidad. De hecho, mis principales medios de acceso a los funcionarios de alto nivel fueron estas redes de relación patrón-cliente, que conectaban a los actuales y antiguos funcionarios forestales de la Ciudad de México, Chapingo y Oaxaca. Estas relaciones personales me abrieron las puertas para llevar a cabo entrevistas largas.[14]

Cada administración se distingue de su predecesora despidiendo a la mayoría de los empleados de confianza. No obstante, los funcionarios valiosos y muy capacitados suelen obtener un puesto en la administración entrante, a veces tras un intervalo de unos cuantos meses, lo que contribuye a mantener la ficción de que la administración es nueva en realidad. Por otra parte, individuos jóvenes y relativamente inexpertos pueden ser nombrados en puestos altos, ya que es posible presentarlos de manera verosímil como gente limpia,

13 Existe una enorme literatura sobre relaciones patrón-cliente en México, empezando con explicaciones culturalistas que atribuyen su presencia a una cultura que valora las relaciones personales con líderes (véase Paz, 1976). Análisis más recientes se han enfocado en los caciques, los hombres fuertes que funcionaban como intermediarios entre el Estado-PRI y la sociedad (Wolf, 1956; Carlos, 1992; De la Peña, 1992), con lo que se creaba un control político mediante estructuras jerárquicas de poder y de redes clientelares. Al igual que la literatura sobre el Estado, análisis recientes de las relaciones patrón-cliente se han desplazado de las perspectivas más o menos estructuralistas, que subrayan la integración y la estabilidad política creadas por estas relaciones (véase Lomnitz, 1982), a estudios que se enfocan en la idea de cómo un patrón poderoso y conectado con el Estado "hace posible la imaginación del poderío del Estado" (De Vries, 2002). Las relaciones patrón-cliente son ambiguas, con aspectos de explotación y de protección por parte del patrón (Friedrich, 1986). En cualquier caso, estas relaciones pueden ser de largo plazo y se sustentan en poderosas normas de reciprocidad desigual.

14 Por razones de índole confidencial, optó por no describir en detalle esta red clientelar.

desligada de las "prácticas corruptas" del régimen anterior.[15] Los cargos altos tienen sus riesgos: cuanto más elevado sea el puesto, más seguro es que el funcionario lo pierda al cambiar sus superiores, de ahí el aforismo que me repitieron varias personas: "Más valen tres chambas mal remuneradas que un trabajo bien pagado". Los puestos bajos están mal pagados, pero resultan más seguros; una combinación de "chambas" (trabajos) es la mejor apuesta ante la incertidumbre. Para quienes carecen de relaciones políticas para aspirar a cargos de primer nivel, la meta es evitar subir muy alto o hundirse muy bajo. Para los funcionarios salientes, el nuevo sexenio es en particular preocupante debido a que su gestión es auditada y temen ser responsabilizados no solo de su propio desempeño, sino también de las acciones de sus subordinados.

El sistema patrón-cliente mediante el cual se consiguen los puestos y el temor de los funcionarios altos a ser culpados por los errores de un subordinado refuerzan la enorme centralización del poder. Los altos funcionarios con base en la Ciudad de México gozan de un grado elevado de poder formal, pero continuamente sufren de una cierta sensación de debilidad porque temen que la información oficial que les mandan sus subordinados no sea verídica:

> … cuando comandas una cosa a los estados, una cosa es que les digas qué hacer, y otra es que la hagan […] es muy fácil que no te sigan. Te dicen: "Sí lo vamos a hacer", pero después no lo hacían. Hay unos jefes que eran difíciles. Es el problema de la agenda del funcionario. Uno está permanentemente gestionando crisis, y no siempre se puede dar seguimiento a lo que están haciendo […] Y su trabajo es de fingir que el aparato funciona, como tú dices. Se dice que los que mandan son los jefes de oficina, cuando en realidad el jefe no sabe si se hacen [los trabajos] o no, cuando no quieren aceptar lo que el jefe dice (A. Azuela de la Cueva, exgerente de Profepa, comunicación personal, 23 de mayo de 2001).

15 Con la legitimidad decreciente del PRI a partir de principios de la década de los ochenta, el Gobierno mexicano contrató cada vez más críticos prominentes de sus políticas para desempeñar cargos altos con el fin de conseguir cierta credibilidad. Julia Carabias fue un ejemplo de este patrón de contratación; un cierto número de los funcionarios de su administración habían tenido cargos en organizaciones no gubernamentales (ONG) críticas del Estado.

El comentario de Azuela refleja acertadamente la situación de los altos funcionarios, que, si bien tienen el control formal del poder, han de luchar sin tregua por mantenerse al día, pues sus subordinados tratan de ocultarles la información. En 2001, la titular anterior de la Semarnap, Julia Carabias, me contó que su mejor medio para enterarse de lo que estaba sucediendo consistía en viajar sin pausa por los estados y leer las peticiones y alegatos que le eran presentados durante las visitas. Aunque estas giras son organizadas con sumo cuidado por las delegaciones estatales de la Semarnap, que tratan de mostrar al centro que todo marcha sobre ruedas, existe una larga tradición según la cual la gente pasa por alto a los funcionarios locales y presenta de forma directa sus solicitudes a la cabeza dirigente del organismo. De este modo, las giras hacen resaltar el poder personal del secretario. Julia Carabias me dijo que estas solicitudes eran una valiosa fuente de información extraoficial:

> México tiene un mecanismo que si le haces caso es muy valioso, la gente escribe cantidad infinita de quejas, cartas, solicitudes. Por centenas. En las giras de trabajo la gente te da una cantidad infinita de documentos. Entonces, eso hay que leerlo con mucho cuidado, y eso se aprende con el tiempo […] ahora la percepción de allí personalmente, de ver de la lectura de las cosas que te llegan, que hay que ser muy cuidadoso y filtrado, porque allí todo el mundo aprovecha ganas de pegarle al otro por motivos políticos, mentiras, por conflictos históricos, pero bueno, de otra forma te enteras muy bien de los temas (J. Carabias, comunicación personal, julio de 2001).

Una razón por la que los altos funcionarios temen estar desconectados es que existen normas rigurosas de no mandar malas noticias a los niveles más altos, por lo menos en forma escrita:

> … hay un proceso de transformación, de traducción entre los varios niveles. Cada nivel tiene su ortografía, su manera de presentar la cosa. Y puede ser que tu subordinado te escriba [algo problemático], y tú le quitas eso, es tu juicio personal, no quieres pasar esa información más arriba, tú decides de quitar esa información. No quieres quedar mal con lo que escribió tu subordinado (A. Azuela de la Cueva, exgerente de Profepa, comunicación personal, 23 de mayo de 2001).

Resulta tan arriesgado para los subordinados expresar opiniones contundentes, que las sugerencias de medidas políticas con frecuencia se hacen en forma de memorandos anónimos (notas informativas), que son editados y alterados a medida que circulan a través del sistema. Cualquier escrito surte un efecto casi violento:

> Mira, si mandas algo desagradable y lo firmas, eso resulta muy fuerte. Tratas de hacer lo mismo primero por teléfono; la gente detesta recibir documentos negativos por escrito. Al administrador no le gusta que le digas algo crítico o malo por escrito: su secretaria lo va a leer y se supone que él es el jefe absoluto, tiene todo el poder y no le gusta perder esa imagen delante de su secretaria. Es que les da miedo a los burócratas la letra escrita (A. Azuela de la Cueva, exgerente de Profepa, comunicación personal, 23 de mayo de 2001).

La información escrita reafirma el poder de los funcionarios altos porque debe ajustarse a las categorías establecidas y representar realidades oficiales; así, el envío permanente de informes de los estados es más importante que el contenido de estos: como hemos visto, los funcionarios altos afirman no creer en ellos y, por tanto, se apoyan en contactos con sus clientes y en comunicaciones populares/extraoficiales. Como señalan Dove y Kammen, "cuando es necesaria la comunicación continua para el Gobierno, su propósito es la metacomunicación y el control, no la transmisión de un mensaje particular o la promoción del diálogo" (Dove y Kammen, 2001). Esto vuelve los contactos personales aún más importantes para los funcionarios que desean saber qué está sucediendo en realidad y para la gente que solicita alguna medida oficial. Los funcionarios estatales se desplazan a la Ciudad de México porque el contacto personal es imprescindible para enterarse de qué políticas requieren realmente atención y para asegurar a sus superiores que sus subordinados están llevando a cabo su trabajo. Una razón adicional para crear y mantener contactos personales en la Ciudad de México es que estas relaciones son clave para cualquier ascenso hipotético.



Fuente. Registro de Kaia Huseby. Depósito de leña en las afueras de la Ciudad de Oaxaca, 2001.

El control formal y la autonomía informal: flujos de información entre centro y periferia

Aunque la Semarnap hizo un esfuerzo notable por descentralizar las decisiones, el control financiero se mantuvo centralizado y las directivas de índole presupuestal y laboral se continuaron tomando en la Ciudad de México.[16] De este modo, las oficinas federales retuvieron un gran control sobre las oficinas estatales de la Secretaría, por medio de los presupuestos y la estructura organizativa. La información sobre el gasto tenía que fluir a las oficinas centrales y

16 Desde inicios de la década de los ochenta el Gobierno federal mexicano ha hecho un esfuerzo concertado por descentralizar el poder a favor de los estados y los municipios, con resultados un tanto ambiguos. Si bien los estados y municipios han ganado un mayor grado de control administrativo, los impuestos y la distribución de los ingresos se llevan a cabo casi por completo en el ámbito federal, y la asignación de estos ingresos a menudo dista de ser transparente, lo que permite a los funcionarios centrales conservar el control de los fondos (Rodríguez, 1999). No obstante, ha habido cierta reasignación genuina de poderes en los años recientes (Ward y Rodríguez, 1999). Durante el periodo en que hice mi trabajo de campo, el presupuesto forestal estaba controlado casi por entero por la Federación, así que, a pesar de los esfuerzos por redistribuir el poder a favor de las oficinas estatales, la Semarnap continuaba siendo una institución muy centralizada.

los funcionarios de nivel estatal se sometían a auditorías onerosas, a semejanza de todos los funcionarios de los niveles más altos.[17]

La norma rigurosa de no poner las malas noticias por escrito garantiza que las regulaciones formales definan los tipos de información escrita enviada por las delegaciones estatales al centro. Un buen ejemplo de esto fue la regulación más reciente para controlar los usos agroganaderos de los incendios (Semarnap, 1997b). Se trata sencillamente del último intento en una serie de controles de incendios, imposibles de hacer cumplir, que se remontan a la década de los treinta. Funcionarios estatales de la Semarnap en Oaxaca me confesaron que habían decidido hacer caso omiso de la nueva norma porque su obligatoriedad habría dañado la relación con las brigadas antiincendios de las comunidades, que llevan a cabo el grueso del combate a los incendios. En lugar de hacer cumplir la regulación o comunicarle al centro que era imposible hacerla acatar, optaron por enviar una copia del nuevo reglamento de control de incendios a todas las autoridades municipales del estado. De este modo, los funcionarios estatales ejercían una autonomía de facto al decidir ignorar la nueva regulación, al mismo tiempo que simulaban obedecerla. Hay tal cantidad de regulaciones, que los funcionarios estatales tienen necesariamente que elegir cuáles van a aplicar y hasta qué punto; así, un grado considerable de autonomía local de facto va aparejada de un silencio discreto. En la práctica, este silencio se traduce en evitar la crítica escrita y pública de las regulaciones y los programas; por otra parte, las conversaciones privadas constituyen un marco aceptable para criticar las políticas oficiales (como los numerosos comentarios críticos que me hicieron los funcionarios de Semarnap). De este modo, la conversación privada y el discurso público se usan para transmitir tipos muy diferentes de información.

Regulaciones: la generación del poder discursivo

Las regulaciones y la retórica oficial se hallan controladas por los altos funcionarios, a quienes la autoridad de definir el significado de las primeras brinda una fuente permanente de poder. Las regulaciones, en general,

17 En los últimos veinte años ha habido una proliferación de complejos controles administrativos sobre el gasto público: estas auditorías consumen mucho tiempo y energía, aunque no queda claro que hayan reducido la corrupción.

no pueden ser criticadas en público por los subordinados, quienes en el mejor de los casos evitan mencionarlas (como sucede con la tala de leña y el control de incendios). De esta manera, el proceso mediante el cual se generan de continuo nuevas regulaciones en la Ciudad de México sirve para realzar el poder formal continuo de los altos funcionarios.

Las regulaciones sobre el ambiente[18] se establecen conforme a un complejo proceso de consulta política y revisión administrativa. La Constitución es la ley última del país, que justifica cada ley ambiental subsiguiente: toda ley, a su vez, debe ser aclarada mediante el reglamento correspondiente, que es emitido uno o dos años después de la ley, y es en buena medida redactado por la burocracia relevante. Por ejemplo, la Semarnap era responsable de redactar y emitir el reglamento de la ley forestal de 1997.[19] Más abajo de este nivel se encuentran las detalladas Normas Oficiales Mexicanas: estas regulaciones supuestamente van a fomentar el control ambiental y regular desde el control de incendios (Semarnap, 1997b) hasta el transporte de productos forestales y la explotación de leña (Semarnap, 1996). El proceso de desarrollo de nuevas regulaciones forestales es muy centralizado: aunque la administración de Carabias trató de entablar consultas, con el carácter más amplio posible en los foros forestales de ámbito estatal y nacional, el proceso real de redactar las regulaciones o normas exige una vasta consulta y negociación interministerial.

A juzgar por el contenido de las regulaciones, este proceso sumamente burocratizado diluye las aportaciones de las ONG y de los representantes de las comunidades que son invitados a comentar las regulaciones propuestas. Las acciones cotidianas y el mundo en que se desenvuelven los funcionarios forestales y los burócratas de la Ciudad de México terminan por gozar de prioridad sobre la aplicabilidad de estas regulaciones en los

18 El proceso para desarrollar regulaciones es similar en otros campos, pero quizá está más abierto al escrutinio público que en el caso de las regulaciones forestales/ambientales, debido a que la población urbana está más cercana a los políticos y es más activa políticamente.

19 Una nueva ley no entra en vigor hasta que va acompañada de un reglamento que introduce los necesarios cambios institucionales. Cuando hay una rápida secuencia de leyes, los funcionarios estatales y municipales pueden decidir actuar con lentitud, sobre la base de que para cuando hayan aprendido el contenido de la ley, ya habrá llegado otra que la va a suplantar.

bosques, a tal punto que terminé por darme cuenta de que mis insistentes preguntas acerca de cómo se aplicaban las normas y las regulaciones eran una suerte de solecismo. En una ocasión le inquirí a un funcionario forestal responsable de la redacción de tres nuevas normas[20] cómo se iban a aplicar. Su respuesta no me dejó la menor duda de que mi pregunta estaba fuera de lugar porque su oficina era responsable de redactar las normas, pero su aplicación se decidía en el ámbito estatal (G. Pacheco, comunicación personal, 10 de abril de 2000). En otras palabras, mis preguntas sobre la aplicación de las nuevas regulaciones estaban erradas, dado que los conceptos relevantes para las regulaciones eran su coherencia formal y el proceso político mediante el cual se negociaban en la Ciudad de México, más que la dificultad u otras consideraciones sobre su aplicabilidad práctica en los bosques.

Una razón adicional para la generación de nuevas regulaciones me fue dada por Julia Carabias, quien declaró que incluso normas imposibles de hacerse acatar proporcionaban un instrumento para que las burocracias federales involucraron a funcionarios locales y a otros actores, debido a que las regulaciones ofrecían un depósito permanente de autoridad a la que podían recurrir los funcionarios:

> La norma de calidad del aire de la Ciudad de México fue violada 357 días del año. ¿A quién clausuras? ¿Le pones un sello al cielo, al palacio de gobierno estatal? Pero tienes un referente, una norma a la que quisieras llegar, armas un proceso. Podrías hacer un plan, pero los planes son más volátiles, entonces armas una norma, y pierdes credibilidad con la violación de la ley, pero si no tienes esos elementos no vas a involucrar a autoridades, a autores, a los sectores involucrados a caminar hacia allá, y que solamente con un plan de gobierno no es lo mismo. No vas a poner campesinos en la cárcel, bueno no, pero ya sabes que hay una norma que dice que no se vale hacer el juego así, entonces las instituciones, la academia, van orientando un esfuerzo nacional que puede durar diez, treinta años. Las normas de deseo no son eficaces, pero son orientadoras (J. Carabias, comunicación personal, julio de 2001).

20 Por razones de respeto al derecho a permanecer anónimo, he omitido el nombre y alcance de la regulación.

Una interpretación final y cínica de las causas de la excesiva regulación me fue ofrecida por un amigo empresario de la Ciudad de México. Este manifestó que los políticos/funcionarios creaban de manera deliberada regulaciones complejas con el fin de mantener su autoridad. Según él, los políticos ideaban intencionadamente regulaciones tan onerosas que todo el mundo se veía obligado a evadirlas o ignorarlas en cierta medida, volviendo de este modo a todos vulnerables a ser procesados por razones políticas en alguna fecha ulterior, en el caso de que tuvieran la temeridad de no acatar los deseos de sus jefes políticos.

¿Qué significaban de hecho las regulaciones para los funcionarios de alto nivel que las generaban y las controlaban? El ex jefe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) me dijo:

> Es que nosotros estamos acostumbrados a actuar al margen de la ley en nuestra vida cotidiana. Lo ves como un accidente de la vida, es una hueva, y no es de ninguna manera el modo de hacer las cosas [...] pero al momento de escribir, intentamos de crear una ley perfecta y, o no pensamos en eso o creemos que la ley se aplicará, que se obedecerá. Pero la gente que escribe la ley no es la gente que es responsable de aplicarla, ni siquiera de mandar los recursos para que se cumpla. La ley es más como una idea de cómo la gente debería de comportarse (*sic*) (A. Azuela de la Cueva, exgerente de Profepa, comunicación personal, 23 de mayo de 2001).

Azuela señalaba que existía cierta tensión entre el significado de las regulaciones y el conocimiento personal de los funcionarios sobre su irrelevancia ante las condiciones prevalecientes en los bosques. Esta tensión se resolvía en cierto modo segregando las arenas oficiales[21] y privadas de criterio práctico y de representación. La primera esfera es la del criterio personal privado, mediante el cual un funcionario puede verse obligado a "actuar al margen de la ley" (por ejemplo, al hacer un pago informal a un policía para ahorrarse complicaciones). En esta esfera privada, un funcionario puede narrar sus

21 Conviene notar que por "arena oficia" entiendo los lugares y tiempos en los que se supone que la gente con capacidades oficiales actúa conforme a reglas formales e informales que gobiernan el modo en cómo se supone que los representantes del Estado deben hablar y comportarse. No me refiero a la "esfera pública" de Habermas (1991) (véase al respecto, también, Lomnitz [1995: 547]) porque indico lugares y tiempos específicos, y la noción de esfera pública entiendo que es más general.

encuentros personales con el Estado, en los que los "accidentes de la vida" de las leyes son mantenidos al margen o utilizados en beneficio propio. En esta esfera privada de interacciones la ley es percibida como peligrosa o fruto del capricho; por tanto, ha de ser manejada con sumo cuidado para evitar daños a manos de los agentes del Estado.

La esfera de acciones oficiales requería que los funcionarios desplegaran diferentes estándares de juicio y representación. En este campo se supone que la ley es formalmente "perfecta", coherente y bien articulada; se da por sentado que forma un sistema de regulaciones, artículos y normas oficiales estéticamente unificadas. En esta esfera pública se considera a la ley como garante del orden, algo benéfico. De este modo, existe una oposición entre las representaciones oficiales y privadas de la ley. Desde la perspectiva de un funcionario que está en vías de redactar una nueva regulación, la ley se ve como una fuente de orden, mientras que desde la perspectiva de una persona privada (que puede ser el mismo funcionario) una nueva regulación es una fuente posible de peligro y desorden. ¿Cómo resuelven esta contradicción los funcionarios que también son personas privadas? Como señalaba Azuela, el mundo social de la gente que redacta las leyes se halla separado del mundo de quienes las financian o tratan de aplicarlas. Así, es relativamente raro que la gente que redacta una nueva ley tenga que negociar a título personal con las instituciones locales y las fuerzas políticas que buscarían sacarle la vuelta o ignorarla; tampoco serían candidatos obvios para tener que evitar una ley que ellos mismos han redactado.[22] Asimismo, los mundos de vida de los funcionarios oficiales se dividen entre ámbito público y privado, lo que les permite minimizar el conflicto entre sus vidas oficiales y privadas. Los escenarios donde se llevan a cabo actividades oficiales y privadas están físicamente separados. Cuando los funcionarios se encuentran en la arena pública, su comportamiento se halla regulado por códigos informales que estructuran lo que debe decirse y cómo debe decirse.

22 La administración de Carabias estaba muy interesada en consultar la redacción de nuevas regulaciones con los consejos forestales locales y regionales en los que las ONG podrían comentar la propuesta de ley. A pesar del proceso de consulta, la legislación y las regulaciones generadas eran criticadas con frecuencia por ser detalladas en exceso. Así, la nueva ley forestal tuvo la misma estructura formal que las leyes y regulaciones forestales anteriores.

La magnitud del margen que separa el comportamiento oficial y privado por medio de estándares informales se puede observar mediante un experimento mental sencillo: imagínense a un funcionario del gobierno diciendo: "No sabemos qué superficie boscosa existe y no tenemos recursos suficientes, así que vamos a aplicar programas y regulaciones forestales en áreas donde sea conveniente y la gente parezca estar interesada. Sabemos que la mayoría no confía en el Estado, y concuerdo en que las regulaciones suelen estar mal escritas, aun cuando no vayan directamente en contra de sus intereses. En cualquier caso, sabemos que no nos van a ofrecer de manera voluntaria ninguna información, y no esperamos que ayuden al Gobierno, a menos que sea por beneficio propio". Esto sería aceptable en su totalidad como descripción privada de lo que hace una burocracia gubernamental, pero sería motivo de risa que alguien lo dijera con todas sus letras en un foro público. La razón por la cual este experimento mental parece una mala broma es que resultaría sumamente disfuncional que un funcionario hablase así en público; hablar de esta guisa revelaría un "secreto público" y minaría el poder discursivo del burócrata.

Poder formal y formas

El control sobre el poder formal de las normas y las regulaciones es rigurosamente jerárquico: los funcionarios de la Ciudad de México llevan a cabo auditorías periódicas de las oficinas estatales de la Semarnap para cerciorarse de que las regulaciones se aplican de modo correcto. Así, la interpretación del significado de las regulaciones es privativa de los funcionarios de nivel más alto; de manera similar, los funcionarios estatales tienen derecho a interpretar el significado de las regulaciones en sus encuentros con los ingenieros forestales en el campo, y así de manera sucesiva. Las categorías de naturaleza y cultura codificadas en las regulaciones dependen de los funcionarios que las interpretan. Por ejemplo, para que se apruebe un plan de aprovechamiento forestal, este ha de ser revisado conforme con sus posibles impactos legales, silvícolas y ambientales; un plan de manejo ideal ha de satisfacer las interpretaciones que ofrezcan los funcionarios de alto nivel de las regulaciones que supuestamente de-

ben sustentar la naturaleza (por ejemplo, desarrollo forestal sostenido, supresión de incendios forestales, protección de especies en peligro) y la cultura (el valor económico de talar, la entrega de permisos de tala en áreas boscosas con tenencia incuestionable). El poder formal es relacional; en cualquier encuentro es obvio quién tiene el derecho a interpretar el significado de las regulaciones. En este sentido, es similar a conceptos tales como modernidad o pureza: nadie puede sostener qué es moderno en definitiva, pero sí qué es más moderno que otro.

Las manifestaciones más concretas de poder formal estriban en el derecho del funcionario a interpretar las formas, a determinar si han sido llenadas de manera correcta y si debe aprobarlas o rechazarlas con una firma. Buena parte de la documentación que pasa por los escritorios de los funcionarios forestales carece de verificación (porque los funcionarios no tienen tiempo de revisarla) o es inverificable (no se dispone de información, como en el caso de los inventarios de biodiversidad). En ese tipo de situaciones lo importante no es el contenido de las formas, sino la habilidad de los funcionarios para interpretarlas o manipularlas. Como señala Michael Herzfeld, los rituales burocráticos tienen que ver a menudo con taxonomías administrativas; la excesiva formalidad y ritualismo permite a los burócratas hacer valer su poder (Herzfeld, 1992: 37-39). En última instancia, es en los escritorios de los burócratas de nivel bajo donde se otorgan o rechazan los permisos de tala; estas clasificaciones taxonómicas reafirman el poder de las categorías de naturaleza y cultura transmitidas desde arriba en forma de regulaciones y normas. Estos actos de poder clasificatorio crean fronteras: entre lo aprobado y lo rechazado, lo ordenado y lo desordenado; de este modo, son actos de rectificación que aspiran a crear orden. Incluso cuando los funcionarios locales ejercen su considerable autonomía de facto (como cuando optan por ignorar o relajar una regulación), están obligados a ensalzar el poder formal de las regulaciones de manera informal y sin registrar su evasión generalizada.

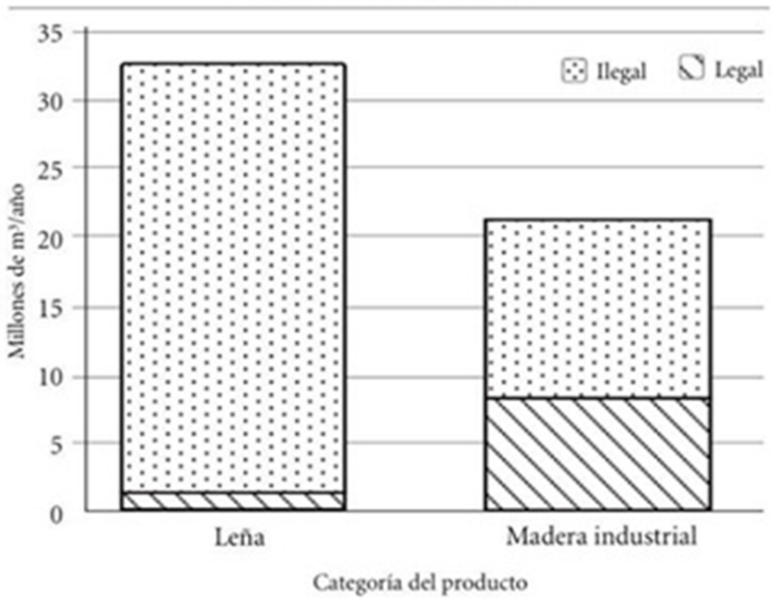
Política oficial y realidad local: tala ilegal y leña

El servicio forestal no ha tenido mucho éxito en el control de la tala ilegal o los usos industriales o domésticos de la leña como combustible. Las versiones oficiales sobre producción de leña y tala ilegal son cotejadas con la documentación presentada por los ingenieros forestales, que a su vez es empleada por los camioneros que transportan madera para mostrar el origen legal de los productos forestales en los puntos de inspección. El sector ilegal de taladores es, por definición, más difícil de calcular, pero una buena estimación de la explotación no reglamentada de los bosques puede hacerse comparando las estadísticas de producción oficial con las cifras de la industria sobre el consumo de productos forestales e inventarios nacionales de cambio en superficie de los bosques.

En 1997, los cálculos oficiales de producción industrial de madera en tronco[23] se elevaron a 7.7 millones de m^3 (Semarnap, 1997a: 5-13). En contraste, un documento reciente sobre las políticas de la Semarnap calculaba que el consumo industrial de madera en tronco en 2000 había sido de 20 millones de m^3 (Indufor, 2000; P. Lehtonen, comunicación personal, 2001; Nikinmaa, 2001). Este cálculo se basa en las cifras de consumo industrial y toma en cuenta las importaciones. La diferencia entre las cifras de consumo y de producción ofrece una buena aproximación al alcance de la tala industrial ilegal en torno a los 13.3 m^3 de madera en tronco en 2000; la gran mayoría madera de pino. El conflicto entre estas dos estimaciones oficiales indica las fracturas que existen entre varias formas de conocimiento legal: diferentes partes del Estado con poca comunicación entre ellas producen cifras distintas.

23 La madera en tronco es una categoría que abarca la madera aserrada y la producción de pulpa, que constituyen los principales bienes industriales forestales. Las tablas de fibra y otros compuestos suelen ser elaborados como subproductos de la producción de los aserraderos.

Figura 1. Cálculos de producción forestal legal e ilegal en México.[24]



Un análisis similar de cifras oficiales contradictorias puede llevarse a cabo a propósito del consumo de leña como combustible (sobre todo de especies de encino), que es incluso más elevado que el del consumo industrial. Están disponibles varias estimaciones desiguales del consumo de leña, pero todas concuerdan en que este duplica o triplica el de la producción industrial. Las cifras publicadas por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2001) muestran que el consumo en 1997 alcanzó 15.9 millones de m3, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Un cálculo mucho más confiable del consumo de leña lo aportan Omar Masera y sus colegas, quienes estimaron el consumo de combustible, leña y carbón

24 El cálculo sobre la producción industrial legal de madera es de Semarnap (1997a); el de la producción industrial ilegal de madera, de Indufor (2000) y P. Lehtonen (comunicación personal, 2001); y las cifras sobre la producción de leña provienen del punto medio del cálculo de Omar Masera (en Díaz, 2000: 75).

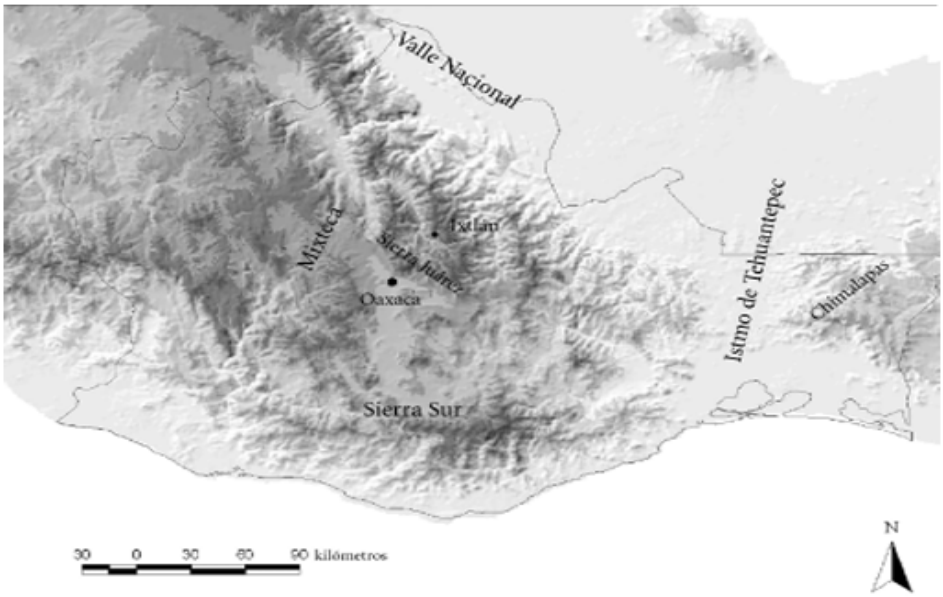
vegetal entre 29.4 y 34.2 millones de m3, con más de 26 millones de personas que usan únicamente leña o en combinación con otros combustibles para cubrir sus necesidades domésticas de energía (Masera *et al*., 1997; Díaz, 2000: 75). Masera efectuó estudios pormenorizados del consumo doméstico, los cuales mostraban que las estadísticas del Inegi eran incorrectas porque asumían que las unidades domésticas que adoptaban estufas de gas dejaban de usar leña, y que la gente urbana tampoco la utilizaba. Casi al mismo tiempo que el Inegi ofrecía la cifra de 15 millones de m^3 (Semarnap, 1996), otras cifras de la Semarnap sobre consumo de leña señalaban tranquilamente que la producción nacional de leña se limitaba a 396 000 m^3 (Semarnap, 1997a). Esta cifra provenía de la producción de leña declarada al Gobierno por las relativamente escasas comunidades y empresas que se tomaban la molestia de registrar ese tipo de información. Así, el grueso del consumo de leña se llevaba a cabo al margen de la ley, y los informes económicos oficiales lo pasaban por alto.

La tala industrial ilegal

Como muestra la Gráfica 1, la producción ilegal industrial es casi dos veces mayor que la de la producción legal, y el servicio forestal solo alcanza a controlar 15% de la producción forestal total de México. El término "producción illegal" no se refiere a un comercio de madera que funcione sin normas o que sea excepcional; la cantidad enorme de la madera ilegal indica que, en lugar de ser excepcional o temporal, el comercio ilegal de madera es una forma bien asentada de la realidad cotidiana de la industria maderera. A semejanza del comercio legal de madera, para que funcione con éxito, el comercio ilegal tiene que estar arropado por normas informales que creen un ánimo de confianza entre compradores y vendedores de que los contratos serán respetados y se les pagará a los abastecedores. De este modo, muchas de las técnicas burocráticas de la empresa moderna forman parte del sector ilegal de la madera: una vez que llega la madera al aserradero o a la fábrica de papel, se reprocesa y entra a la economía legal de la madera. Mis informantes aceptaban que la tala ilegal era más fuerte en Michoacán, Jalisco, Durango y Chihuahua, estados en los que

la capacidad instalada de los aserraderos excedía con mucho la tala aprobada legalmente. Buena parte de la madera ilegal quizá sea procesada en los numerosos aserraderos pequeños de los estados mencionados, que cuentan con una capacidad instalada de más de 12 millones de m^3, pero que declaraban una producción de sólo 6.4 millones de m^3.

Figura 2. Mapa de las regiones principales del estado de Oaxaca.



Durante mi trabajo de campo en Oaxaca no pude hacer un cálculo razonable de la tala ilegal; los cálculos de mis interlocutores sobre la proporción de tala legal e ilegal dependían de su posición política o institucional. Los funcionarios de más alto nivel de la Semarnap solían considerar la tala ilegal como una proporción relativamente pequeña del total, tal vez de 10%, mientras que los inspectores en el campo creían que la tala ilegal era mucho más común y los activistas ambientalistas en la Sierra Juárez veían la tala ilegal como prácticamente omnipresente. Este tipo de acusaciones de ilegalidad solían estar vinculadas con las constantes

acusaciones de corrupción oficial, lo que hace imposible el cálculo de la verdadera magnitud de la tala ilegal. Según mis propias observaciones del manejo forestal comunitario en la Sierra de Juárez de Oaxaca, calculo que las comunidades forestales organizadas, como Ixtlán o Pueblos Mancomunados, declaraban cifras de producción maderera reales, pero en Oaxaca hay solamente 59 comunidades que cuentan con un nivel alto de control del bosque; otras 77 comunidades venden madera a contratistas sin participación de comuneros y 147 no declaran ventas de madera (Anta *et al*., 2000). Estas comunidades menos organizadas tenderían a practicar la tala ilegal porque la legal es más compleja y costosa. Hay un total de 570 municipios y más de 7 000 comunidades en el estado de Oaxaca; la mayor parte de estas no poseen bosques de interés comercial, y es probable que no tengan relación alguna con el servicio forestal ni con los servicios técnicos forestales. Sin embargo, muchas de esas comunidades transportan leña o madera al mercado, y por fuerza operan al margen de la ley. Los funcionarios del servicio forestal sostenían que las áreas donde se daba una tala ilegal significativa incluían los Chimalapas y la Sierra Sur.

La tala ilegal de leña para combustible

La explotación de la leña pertenece a un mundo aún más ambiguo que el de la tala ilegal de madera industrial. Conforme a las regulaciones oficiales, la tala de leña para uso doméstico puede hacerse sin permiso siempre y cuando no se corten árboles verdes y que sea para consumo propio (Semarnap, 1996). Esta regulación codifica una ficción oficial en la cual únicamente se consume leña seca, lo que permite a los taladores aducir que ellos solo cortan madera seca y a los funcionarios del servicio forestal concentrarse en áreas más provechosas de trabajo. Esta autorización para la recogida de leña de árboles "secos" es una inveterada política oficial. Ya en la década de los cincuenta los leñadores de Tlaxiaco solicitaban que se les permitiera vender leña sin interferencias porque se limitaban a recoger "leña seca" (VV. AA., 1958). En mis conversaciones con tianguistas de los mercados de Oaxaca en 2001-2002, todo el mundo admitía que solo usaba leña seca para la producción de carbón vegetal,

hacer tortillas o quemar loza. Se trataba de personas que no me conocían y no tenían razón alguna para confiar en mí, pero aun una relación relativamente breve podría desenmascarar la cortés ficción oficial. Durante el curso de una entrevista con un leñador retirado de la comunidad de San Felipe del Agua en 2001, insistió al principio que él y otros leñadores de la comunidad siempre habían cortado leña seca; más tarde, durante la misma conversación, admitió que cortaban madera verde y la secaban antes de llevarla al mercado. De hecho, en años recientes la venta de leña y carbón en el mercado de abastos de Oaxaca ha sido causa de repetidos conflictos con Semarnap y Profepa. En 2001, funcionarios de este último organismo me indicaron que, a causa de la fuerte oposición política por parte de los tianguistas y comerciantes, se decidió tolerar la venta de leña y carbón.

Conocimiento e ignorancia oficiales: la repetición de cifras de producción incorrectas

Los funcionarios del servicio forestal son plenamente conscientes de que la tala ilegal es más elevada que la explotación legal: un informe oficial del brazo ejecutivo de Semarnap calculó que los usos industriales ilegales alcanzaban 3.4 millones de m^3, más 37 millones de m^3 adicionales de leña (Profepa, 1997: 108-134). A pesar de este reconocimiento limitado de las debilidades de las políticas oficiales, el servicio forestal continúa generando estadísticas que presentan una y otra vez los mismos errores y omiten por entero el valor económico del uso de la leña (Semarnap, 1997a). Esta omisión permite que las políticas del servicio forestal parezcan más coherentes: un análisis sencillo del consumo de leña redunda en un valor económico total del consumo de leña y carbón vegetal de entre 636 y 1 400 millones de dólares, en comparación con los 620 millones de dólares de la producción de troncos de madera industrial.[25] El hecho de que no se haya realizado un estudio serio del impacto económico o ecológico del uso de la leña es fruto de los vínculos institucionales del servicio forestal

25 Tomé estas cifras sobre el valor de reemplazo de la leña y del carbón vegetal de López *et al*., 1997; la producción total de leña en México de Díaz, 2000, y las estimaciones del valor de la producción legal e ilegal industrial de madera en troncos de Nikinmaa, 2001.

con el sector industrial de la tala de madera. El desconocimiento oficial del valor de la leña para la economía nacional mexicana es el resultado de la falta de relaciones entre el Estado y los usuarios de leña, y de que dicho uso se hace en el ámbito local o solo se transporta a una distancia relativamente corta, de modo que a los funcionarios estatales les resulta prácticamente imposible intervenir en el transporte de leña.[26]

La ignorancia oficial acerca del uso de la leña se traduce en políticas oficiales que apenas aportan respaldo alguno a la gestión y manejo de la leña, excepción hecha de un programa con bajo financiamiento para fomentar las estufas de leña de bajo consumo de energía.[27] De este modo, las estadísticas oficiales reflejan políticas y normas oficiales sobre lo que se debe informar y lo que se debe ignorar: la información que minaría la legitimidad de las políticas oficiales que dedican casi todos los recursos a la tala industrial se ignora de manera sistemática. En este caso, la ignorancia es un recurso valioso (Van Ufford, 1993) que respalda la continuación de programas importantes. En 2003 la página *web* de la Semarnat[28] seguía mencionando las inverosímiles cifras bajas de producción de leña (Semarnap, 1999). Así, existe una contradicción permanente entre un conjunto de cifras oficiales y otro, contradicción que se extiende al ámbito de las políticas. Un programa presidencial de política forestal, fechado en 1994, declaraba que la producción de leña era de importancia crítica para los habitantes rurales de México y prometía fomentar el uso de estufas eficientes y el desarrollo de sistemas silvícolas que incorporaran la utilización de leña como combustible (Poder Ejecutivo Federal de México, 1995). Esta declaración continuó siendo una aspiración: en 2003 la tala sancionada oficialmente se concentraba casi de forma exclusiva en la tala industrial de especies de pino, mientras que la tala de encino para leña permanecía ignorada. De este modo, los bosques de pino-encino continúan estando divididos conceptualmente por especie y

26 Este tipo de desconocimiento oficial sobre el consumo de leña parece ser ubicuo en todo el mundo (Dove y Kammen, 2001: 627).

27 En el estado de Oaxaca dos funcionarios de la Semarnap de nivel medio dedicaban parte de su tiempo al fomento del uso de este tipo de estufas.

28 La Semarnat es la agencia sucesora de la Semarnap. Se fundó en 2001, cuando la responsabilidad de los organismos de pesca pasó a la Secretaría de Agricultura.

usuario: se registra en torno a 40% de la tala industrial de pino y menos de 1% de la de encino para leña, aunque esta explotación se lleva a cabo en los mismos bosques. Desde el punto de vista del servicio forestal, la extracción de madera de pino es en parte visible, mientras que la de leña de encino pasa desapercibida casi por entero.

El carácter invisible del encino se refleja en los sistemas silvícolas promovidos por el Estado, que están diseñados en exclusiva para garantizar la regeneración de los pinares y la producción de pino, y no toman en cuenta la presencia o desarrollo de las especies de encino. De este modo, como señala Paul Robbins a propósito de los silvicultores de Rajastán, las categorías oficiales de la naturaleza se arraigan en las prácticas oficiales y los diferentes significados surten efectos materiales y sociales directos (Robbins, 1998). En México, uno de los efectos materiales de las clasificaciones oficiales es que se genera un creciente dominio del encino en bosques de pino-encino talados de manera selectiva (Negreros y Snook, 1984; Snook 1986). La falta de una consideración sistemática de especies de encino en los sistemas silvícolas (aun en los sistemas de plantación de árboles con semillas de reciente adopción) suele redundar en una regeneración pobre de especies de pino debido al dominio creciente del encino; el resultado del desconocimiento oficial acerca de las especies de encino es ecológicamente contraproducente.

En la comunidad de Ixtlán, como en muchas otras poblaciones forestales de la Sierra Juárez, los comuneros pugnan por asegurar la regeneración de los pinares y reducir la presencia de encinos en sus bosques. Planes políticos recientes para las plantaciones forestales mexicanas amplían la producción industrial de pino (Nikinmaa, 2001), pero no mencionan o no se esfuerzan por integrar con la producción no industrial de encino en las mismas explotaciones. De manera similar, los planes de manejo de los bosques oaxaqueños en general buscan obligar a las comunidades que cuentan con bosques a talar el encino de las áreas más húmedas y elevadas de los bosques comunitarios, donde crece la madera de pino de mejor calidad (sobre todo *Pinus patula* y *Pinus ayacahuite*). Estas directivas son fruto de la ignorancia oficial acerca del encino, ya que agrupa en la misma clasificación a todas las especies de este árbol.

En la Sierra Juárez, los comuneros prefieren talar encino de las zonas más secas, donde crecen las especies de encino favoritas (conocidas como encino delgado, encino de cucharilla y encino blanco).[29] En varios casos, comunidades forestales "modelo" continúan talando encino de las áreas de suministro de leña tradicionales, en contravención de sus planes de manejo. Los comuneros clasifican las especies de encino de acuerdo con su adaptabilidad para hacer leña o carbón vegetal; los ingenieros forestales clasifican las especies de pino conforme con su valor para la producción de madera. Cada una de estas clasificaciones se halla arraigada en las prácticas sociales prevalecientes en los mundos sociales separados de los funcionarios forestales y de los comuneros. Unos y otros están coludidos en el mantenimiento de la ignorancia oficial, ya que evitan mutuamente la discusión pública de la explotación de la leña.[30]

La existencia de cifras oficiales contradictorias sobre la leña indica que funcionarios de alto nivel del servicio forestal son conscientes de que el uso ilegal de leña y la tala sin autorización exceden con mucho la producción forestal permitida legalmente. No obstante, se continúan elaborando y repitiendo cifras incorrectas en las declaraciones oficiales. En todos los niveles del Estado mexicano, los funcionarios realizan sus declaraciones públicas con series impresionantes de estadísticas: tantas carreteras construidas, tantos árboles plantados… Esta práctica ha prevalecido de tal manera que la presentación de números oficiales es casi en sí el rasgo distintivo de un político o funcionario de gobierno.

La repetición de estadísticas reafirma el poder estatal de manera directa (cuáles carreteras se construyeron, cuáles planes de desarrollo se financiaron), e indirecta, al dejar sentado de forma retórica que se tiene el control del espacio y del tiempo a los que se hace alusión en las estadísticas. Es precisamente en la repetición misma y la continuidad de las estadísticas oficiales que el Estado se construye como una entidad perdurable, que sostiene que controla el espacio de los bosques de México y

29 En Ixtlán estas especies posiblemente sean *Quercus laurina*, *Quercus rugosa* y *Quercus obtusata*.

30 Un ejemplo similar de esferas de desconocimiento burocrático y campesino mantenidas mutuamente en el norte de México se encuentra en Arce y Long (1993).

sus transformaciones en el tiempo. De esta manera, la repetición de cifras oficiales es, en parte, retórica que se utiliza para construir la imagen del Estado y para enmarcar el significado de las actividades estatales.

Lejos de ser negadas, las cifras oficiales incorrectas sentaron las bases de políticas oficiales que ignoraron el sector leñero, mientras que las cifras sobre uso de leña eran repetidas por funcionarios forestales del ámbito local, aun cuando en lo personal estuvieran convencidos de que eran incorrectas. En un congreso de comunidades forestales de Oaxaca en 2000 (Anónimo, 2000), un alto funcionario de la Semarnap presentó estadísticas de producción de madera en un auditorio con media asistencia de representantes comunitarios. No hizo mención de la producción de leña o carbón vegetal, aunque tanto él como su público sabían que la tala de leña era el pan de cada día en las comunidades; su presentación evitó hacer referencia a un área vergonzosa de debilidad oficial.[31] En una plática privada, un par de semanas después, el mismo funcionario me confesó que la producción de leña era por lo menos tan grande como la producción industrial y que, si bien era ilegal, se "toleraba". El servicio forestal carece de los medios para controlar la tala de leña y, por esa razón, prefiere ignorar: las reglas informales de la retórica oficial dicta que la debilidad institucional del servicio de bosques no pueda ser admitida de modo abierto.

Una evaluación mucho más caústica de las políticas oficiales sobre la tala de leña me la ofreció un alto funcionario de la nueva administración de Semarnat:

> En cuanto al carbón vegetal y la leña, la política forestal mexicana ha sido un secreto que se ha resuelto ignorándolo, [nadie] ha querido enfrentar el problema. En 1995, la FAO nos envió a uno de los expertos mundiales en el tema, alguien que conocía todas las metodologías para llevar a cabo un estudio riguroso; entrenó a gente aquí […] una serie de gente. Los resultados y las propuestas [de este estudio] quedaron en un cajón bajo llave (C. González Pacheco, comunicación personal, 25 de mayo de 2001).

31 Esta clase de "secreto público" es muy similar a la penetración superficial de iniciativas de descentralización con respaldo internacional descritas por Rally Falk Moore en África Occidental (Moore 2001).

González describe la producción de leña como un "secreto oficial" embarazoso que se mantiene oculto. La producción de leña ha sido una preocupación recurrente en la política forestal mexicana: ya durante la administración de Miguel Ángel de Quevedo (1936-1939) el servicio forestal trató de regular la explotación de leña y se publicaron estudios sobre el uso del carbón vegetal (Barriguete, 1941). La leña volvió a aflorar como un tema de interés en la década de 1970 (SARH, 1979), y se hicieron propuestas para establecer plantaciones de leña a inicios de la década de 1980 (Jayo, 1980); los estudios de la FAO a los que se refiere González (Masera *et al*., 1997) fueron encargados por la Semarnap para luego dejarlos en el olvido. Lejos de ser un secreto oculto, la información sobre el uso de la leña desde hace años ha estado disponible en documentos oficiales. El "redescubrimiento" constante de la tala desenfrenada de leña requiere una permanente amnesia institucional respecto al pasado de la propia Semarnap, aunque con más o menos conocimiento personal.

Esta amnesia es reveladora de la importancia de las conexiones y alianzas para la creación de conocimiento. El servicio forestal, con sus limitados recursos humanos, dispone de escasos medios para hacer cumplir las regulaciones sobre tala de leña en su forma actual. Con los años, el servicio forestal tomó una decisión política consistente en no aplicar las regulaciones sobre la leña, en buena medida porque habría sido política y prácticamente imposible hacerlo. El resultado de esta política ha sido que las conexiones institucionales del servicio forestal se establecen principalmente con el sector maderero industrial, que obedece en parte las reglas, en lugar de con el ingobernable sector de la leña para uso doméstico. Los empleados del servicio forestal no se enfrentan a las prácticas diarias de la recolección de leña y se cuidan de hablar del asunto cuando se juntan con gente rural, como en la reunión antes descrita. La gente de campo, versada de modo similar en las convenciones de la retórica oficial, sabe cómo esquivar un tema que puede resultar incómodo.

Variedades de conocimiento e ignorancia

Este ejemplo de ignorancia oficial, de actos de desconocimiento y de colusión entre los funcionarios y sus clientes demuestra que el estereotipo del Estado que recoge analiza e interpreta información es un ideal más

que una realidad. En el pasado, los estudiosos del conocimiento oficial han descrito cómo el Estado y sus agencias de desarrollo adquieren el poder de definir literalmente "qué es" (Escobar, 1991; Ferguson, 1994) y cómo pasan por encima de la complejidad social y ecológica local con consecuencias en ocasiones desastrosas (Scott, 1998). En el contexto de las políticas que regulan el uso de la leña en México, parece suceder lo contrario: la particular forma del poder del Estado se manifiesta en la ignorancia oficial con conocimiento personal, y en el mantenimiento del discurso oficial, aunque sea irreal. Más que producto del poder estatal, el conocimiento y la ignorancia oficial son el resultado directo de una cultura institucional que hace de las regulaciones la justificación de las intervenciones oficiales en la vida rural y que preconiza una separación entre los funcionarios que pueden interpretar las regulaciones y los miembros del público que optan por conciliarlas o evitarlas.

La ignorancia oficial acerca del alcance del uso de la leña es la premisa que se esconde detrás de las regulaciones del control restrictivo de la leña. Estas regulaciones rara vez se hacen acatar, pero la posibilidad de la obligatoriedad de su acatamiento crea desconfianza hacia los funcionarios entre la gente del campo, que trata de esconder su uso ante los ojos oficiales, por temor a que estos algún día busquen hacer cumplir las regulaciones. La otra cara de la moneda de esta desconfianza popular es la ignorancia oficial acerca de la magnitud y la ubicación de la tala de leña. La tala es, por supuesto, un "secreto público": como he mostrado, los funcionarios y la población rural saben que la tala ilegal de leña es generalizada. El uso de la leña es conocido por los funcionarios, pero este conocimiento es el de un "conocimiento con ignorancia oficial", por lo que ni se actúa con base en él ni se utiliza; su carácter "secreto" significa que se halla excluido de las actividades de los funcionarios, y se vuelve así un tanto difuso. De este modo, no se trata de un caso de ignorancia crasa, sino de grados más sutiles de conocimiento parcial y olvido conveniente. De hecho, las prácticas institucionales son los mejores medios para evaluar qué "saben" oficialmente los funcionarios. Las prácticas no oficiales forman parte de este conjunto de prácticas (como hacerse de la vista gorda ante el uso de la leña) y muchas generan un reconocimiento erróneo u olvido, como en

el caso de los usos agropastoriles de los incendios, que son oficialmente ilegales pero ubicuos en todo el México rural.

Sostengo que la ignorancia oficial con conocimiento personal es fruto de la forma en que las instituciones forestales se hallan organizadas y de cómo están conectadas a las comunidades forestales. Los ingenieros forestales individuales pueden estar familiarizados con el uso local de leña, pero su conocimiento no trasciende porque no se incluye en los informes oficiales y en la elaboración de políticas. Las únicas personas que experimentan la contradicción entre las realidades oficiales y no oficiales son los ingenieros forestales privados que fungen como intermediarios entre el servicio forestal y las comunidades, certificando y supervisando los planes comunitarios de manejo de los bosques. Esto se puede ilustrar al examinar la manera en que se usa la leña en una "comunidad forestal modelo" de Oaxaca.



Fuente. Registro de Kaia Husebey. Venta de leña y carbón. Mercado de Abastos, Oaxaca, 2001.

En una comunidad de este tipo el uso de la leña está regulado de manera interna conforme al plan de manejo oficial, incluso si se debe pasar por el enorme inconveniente de talar encinos que se encuentran lejos de la localidad y que son menos apropiados para su uso como combustible. El plan de manejo de los bosques especifica que el encino debe ser talado en la zona pino-encino más alta y húmeda, pero la comunidad se ha negado a hacerlo, si bien ha utilizado la documentación oficial del plan con el fin de transportar sin problema carbón vegetal al mercado. El ingeniero forestal de la comunidad, que en principio era el responsable de garantizar que se respetara el plan de manejo, me dijo:

> Esto representaba un problema para mí como ingeniero forestal porque si [llegan los inspectores], iban a notar que no se estaba talando encino en las partes altas del bosque, y me harían responsable. Le pedí a la comunidad que talaran algunos encinos en las puntas de los cerros, de modo que si llegaba la inspección pudieran justificar su [documentación de producción] (ingeniero forestal privado anónimo, comunicación personal, 24 de enero 2001).

En su calidad de ingeniero forestal, el ingeniero está familiarizado con la irrealidad de las cifras oficiales del uso de leña, y se ve obligado a llegar a acuerdos con la comunidad con el fin de mantener las apariencias en caso de hipotéticas inspecciones. Esto lo coloca en una posición incómoda: el servicio forestal podría, en un determinado momento, decidir hacer una auditoría rigurosa a su plan de manejo y descubrir que no ha cumplido sus obligaciones. Funcionarios del servicio forestal en el campo a menudo establecen este tipo de complicidad con las comunidades rurales, ayudándolas a mantener la apariencia de que cumplen con las regulaciones. Esto los coloca a merced de una auditoría, lo que mantiene el poder simbólico de las regulaciones incumplidas e imposibles de cumplir.

En los niveles más altos de la burocracia no existe una tensión tan fuerte entre la realidad oficial y la experiencia personal. Los ingenieros forestales pueden ser conscientes de que el uso de la leña rebasa las estimaciones oficiales, pero la mayoría adopta una visión difusa y fácilmente desechable del asunto.

Conclusiones

En este trabajo muestro que el servicio forestal mexicano, al igual que otras instituciones gubernamentales del país, se caracteriza por una gran inestabilidad como institución y en cuanto carrera burocrática. Los funcionarios de alto nivel manejan esta inestabilidad manteniendo un control riguroso sobre el discurso formal tal como se manifiesta en las leyes, regulaciones, normas, declaraciones oficiales y documentos en general; controlan los nombramientos, la definición de políticas y presupuestos. Investidos de esta enorme concentración de poder formal en la cima de la jerarquía, los funcionarios de nivel bajo y medio acatan las formas del discurso oficial al mismo tiempo que se acomodan a las realidades sociales y ambientales locales. Como lo he señalado, los funcionarios bajos reconcilian las tensiones entre la realidad oficial y local omitiendo con sumo cuidado información sobre la situación local en sus informes a la Ciudad de México; ejemplos de tales omisiones incluyen informes acerca del desacato general a las regulaciones que controlan el uso de la leña y la negativa de facto por parte del servicio forestal de aplicar las regulaciones sobre control de incendios en Oaxaca.

El deficiente flujo de información hacia arriba tiene numerosas implicaciones para la percepción de la naturaleza y las regulaciones por parte de los funcionarios de alto nivel. Estos son responsables de representar al servicio forestal como una institución capaz de diseñar e imponer una serie de reglas para el manejo de la naturaleza. Pero como es remota la posibilidad de que reciban evidencia oficial de que las reglas se están ignorando, los altos funcionarios terminan por creer que las reglas son útiles y significativas, aun cuando cuenten con pruebas que muestran lo contrario (por ejemplo, el caso de las regulaciones sobre el control del uso de leña como combustible). Los altos funcionarios pueden mantener estas creencias en apariencia contradictorias porque viven y trabajan en un mundo social en el que el lenguaje formal de las regulaciones no es puesto en tela de juicio. Las prácticas mediante las cuales crean nuevas regulaciones y representan al servicio forestal en eventos públicos hacen de los mundos natural y social —tomados en cuenta por las regulaciones— algo mucho

más inmediato que la tala de leña y la quema generalizada. Para aclarar esto podemos examinar los diferentes modos en que los altos funcionarios "conocen" el uso de leña y la producción de madera.

Se conoce el uso de la leña ilegal como un acto producido sobre la base de un informe ocasional. No obstante, no existe un conjunto de instituciones responsables de controlar el uso de leña, no se elaboran informes sobre la producción de leña ni se organizan discusiones públicas sobre el tema. Esto hace del conocimiento del uso de leña algo distante y teórico, mientras que el conocimiento de la producción de madera es mucho más inmediato y concreto: informes voluminosos cruzan por los escritorios de funcionarios responsables de la producción industrial de madera; los planes de manejo deben ser analizados y aprobados; los funcionarios están obligados a declarar las cifras de producción anual y posiblemente a aumentarlas. Las prácticas diarias en las que incurren los altos funcionarios forestales hacen que parezca distante el conocimiento sobre el uso de la leña como combustible. Para los funcionarios de nivel más bajo, el uso de la leña es conocido mucho mejor, pero son únicamente los ingenieros forestales de los servicios técnicos que trabajan en los bosques quienes tienen la evidencia física de la evasión generalizada de los controles oficiales sobre la leña.

Podría argumentarse que el servicio forestal es ignorante y débil y que su ignorancia se debe a su debilidad. No obstante, esto significaría negarse a reconocer la forma característica del poder del servicio forestal (y del Estado), la sempiterna posibilidad de que, en un caso particular, un funcionario del servicio forestal pueda decidir invocar una regla universal. Así, la forma característica del poder del servicio forestal es la invocación o evasión de reglas universales abstractas (ya sean estas cumplidas o evadidas) en el contexto de la obligatoriedad esporádica y parcial de ellas. Esta forma de poder genera, precisamente, el discurso popular acerca de la corrupción y la incompetencia, compartido por ingenieros forestales y por la población. Este discurso, que critica el fracaso del Estado en correspondencia con los ideales abstractos de justicia y protección ambiental, reconfirma el poder estatal en el momento preciso en que lo pone en tela de juicio, justificando la generación de nuevas reglas y regulaciones, lo que a

su vez se presta a evasiones y críticas adicionales. En este artículo describo la ignorancia oficial relativa al uso de la leña, pero se pueden llevar a cabo análisis similares a propósito de los incendios agropastoriles (Mathews, 2003a; 2005) y la tala ilegal, o fuera del campo ambiental a propósito del tráfico de drogas, la corrupción oficial o casi cualquier ámbito de interés y de actividad estatal. En estos casos, el retrato del Estado que emerge no es el de un conocedor, sino del Estado como categoría cultural, como una práctica y un campo de lucha cuestionado, más que una institución que recopila interpreta y actúa sobre la base del conocimiento de la naturaleza y la sociedad. La concepción del Estado que sabe es la que sí resulta una categoría cultural. Como apunta Bourdieu:

> Tratar de pensar el Estado equivale a tomar el riesgo de asumir (o ser asumido) un pensamiento del Estado, es decir, de aplicar al Estado categorías de pensamiento producidas y garantizadas por el Estado, y de ahí reconocer de manera errada su verdad más profunda (1994: 35).

La ignorancia oficial que he tratado de describir cae en este tipo de reconocimiento incorrecto[32] impuesto por el poder de las categorías y las prácticas oficiales. Como tal, la ignorancia puede ser a la vez activa y pasiva, puede ser resultado de actos de omisión cotidianos o una negligencia de largo plazo.

El conocimiento y la ignorancia oficial se hallan dictados por las prácticas discursivas de los funcionarios y sus clientes, y por la forma en que esas prácticas se han arraigado en la estructura de poder e institucional del servicio forestal. Esto lleva a una conclusión importante y contraintuitiva: es improbable que la ignorancia oficial se resuelva con la producción de más información; más bien, el conocimiento y la ignorancia son el resultado de la estructura y las prácticas institucionales. Los reformistas que buscan abordar el tema de la degradación de los recursos naturales (o cualquier otra política social) no tendrán que preguntar ¿qué tipo de

32 Agradezco a Amita Baviskar el haber llamado mi atención sobre el "reconocimiento incorrecto" como un modo valioso de examinar la ignorancia oficial y sobre la posición activa de ignorar por parte de los funcionarios.

conocimiento social y ecológico necesitamos para manejar los recursos naturales?, sino ¿qué clase de institución podría hacer uso del conocimiento ecológico y social de los recursos naturales? Por ejemplo, en el caso del manejo de la leña, es remoto que el Estado mexicano pueda actuar sobre la base de un mejor conocimiento acerca del consumo de leña con el fin de ayudar a los usuarios de esta a manejar mejor sus bosques.

El conocimiento sobre el uso de la leña ha sido producido una y otra vez, y de igual forma se ha "olvidado" porque el Estado mexicano está interesado en regular y cobrar impuestos a la producción industrial de madera y carece de ligas institucionales con el sector doméstico de la leña. Una parte de la respuesta podría ser la descentralización administrativa, que daría a los funcionarios locales la autonomía para actuar con base en lo que saben; de hecho, la descentralización administrativa es uno de los temas fundamentales del debate político mexicano contemporáneo (Rodríguez, 1999; Ward y Rodríguez, 1999). Empero, hasta la fecha, la descentralización ha sido más retórica que práctica; el Gobierno federal ha retenido el control de casi toda la recaudación significativa de impuestos y las funciones distributivas y la responsabilidad del ambiente permanecen en la órbita federal. Esto ha limitado el poder de los Gobiernos estatales y locales para alterar las políticas del servicio forestal e indica, sin lugar a dudas, que la ignorancia oficial acerca de la naturaleza continuará siendo gestada en la Ciudad de México.

Referencias[33]

Abrams, P. 1988. Notes on the difficulty of studying the state. *Journal of Historical Sociology*, *1*(1), 58-89.

Agrawal, A. y K. Sivaramakrishnan. 1998. *Agrarian environments: resources, representations and rule in India*. Duke University Press.

33 N. de T. Algunas referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias difieren de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Anderson, B. R. 1991. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

Anónimo. (2000, 8-9 de noviembre). Presentación de Semarnap. *Foro Forestal Oaxaca 2000*.

Anta Fonseca, S., A. Plancarte Barrera *et al*. 2000. *Conservación y manejo comunitario de los recursos forestales en Oaxaca*. Semarnap.

Arce, A. y N. Long, 1993, "Bridging two worlds: an ethnography of bureaucrat-peasant relations in Western Mexico". En M. Hobart (ed.). *An anthropological critique of development: the growth of ignorance* (177-208). Routledge.

Barriguete, M. V. 1941. *El problema del carbón en México* [Tesis de Maestría en Ingeniería Forestal, Escuela Nacional de Agricultura].

Beltrán, E. 1964. *La batalla forestal: lo hecho, lo no hecho, lo por hacer*. IMRNR.

Borges, J. L. 1963. El milagro secreto. En *Obras completas (Ficciones)*, 161, 1. Emecé.

Borgo, G. 1998. *México forestal: visto por trece profesionales del ramo*. S. e.

Bourdieu, P. 1994. Rethinking the state: genesis and structure of the bureaucratic field". En *Practical reason* (35-63). Stanford University Press.

Carlos, M. L. 1992. Peasant leadership hierarchies: leadership behavior, power blocs, and conflict in Mexican regions. En E. van Young (coord.). *Mexico's regions: comparative history and development* (91-117). Center for U.S. Mexican Studies, UCSD.

Castillo Román, A. 1996. Se atienden todas las demandas por ilícitos que dañan los recursos. *El Nacional*. México.

Chambers, R. 1988. *Managing canal irrigation*. IBH Publishing Company.

Díaz Jiménez, R. 2000. *Consumo de leña en el sector residencial de México. Evolución histórica de emisiones de CO2* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México].

Dove, M. R. y D. M. Kammen. 2001. Vernacular models of development: an analysis of Indonesia under the "New Order". *World Development*, *29*(4), 619-639.

Escobar, A. 1991. Anthropology and the development encounter: the making and marketing of development anthropology, *American Ethnologist*, *18*(4), 658-682.

Evans-Pritchard, E. E. 1940. *The Nuer: a description of the modes of livelihood and political institutions of a nilotic people*. Oxford University Press.

FAO. 2001. FAO Statistical Database.

Ferguson, J. 1994. *The anti-politics machine. "Development" depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. University of Minnesota Press.

Foucault, M. 1980. Truth and power". En *Power/know- ledge: selected interviews and other writings*, 109-133. Pantheon Press.

Foucault, M. 1991. Governmentality. En G. Burchell, C. Gordon y P. Miller (eds.). *The Foucault effect: studies in governmentality* (87-104). University of Chicago Press.

Friedrich, P. 1986. *The princes of naranja: an essay in anthro historical method*. University of Texas Press.

Gerth, H. H. y C. W. Mills. 1958. *From Max Weber: essays in sociology*. Oxford University Press.

Gordon, C. 1991. Government rationality. En G. Burchell, C. Gordon y P. Miller (eds.). *The Foucault effect: studies in governmentality* (1-51). University of Chicago Press.

Grindle, M. S. 1977. *Bureaucrats, politicians and peasants in Mexico: a case study in public policy*. University of California Press.

Guillermo Hernández, L. 2001. Burócratas, a prueba. En puerta limpia de burócratas. Nace el Renata, consuelo para burócratas sin cabida. *Milenio*, 1-4. México.

Habermas, J. 1991. The structural transformation of the public sphere. Rethinking popular culture. En *Rethinking Popular Culture: Con-*

temporary Perspectives in Cultural Studies, editado por Chandra Mukerji y Michael Schudson, 398–404. Berkeley: University of California Press.

Herzfeld, M. 1992. *The social production of indifference: exploring the symbolic roots of western bureaucracy*. Berg.

Hinojosa Ortiz, M. 1958. *Los bosques de México: relato de un despilfarro y una injusticia*. México: Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas.

INDUFOR. 2000. *Semarnap: Plan estratégico forestal para México 2020*.

Jayo Ceniceros, A. 1980. Plantaciones para uso doméstico [ponencia]. *Algunas experiencias personales sobre reforestación*, SARH, SAM, Oaxtepec, Morelos.

Lomnitz, L. 1982. Horizontal and vertical relations and the social structure of urban Mexico. *Latin American Research Review*, *17*(2), 51-74.

Lomnitz, L. 1995. Ritual, rumour and corruption in the constitution of the polity in modern Mexico, *Journal of Latin American Anthropology*, *1*(1), 20-47.

Lomnitz Mayer, L. *et al*. 1983. Recruiting technical elites: Mexico's veterinarians, *Human Organization*, *42*(1), 2-29.

López Arzola, R., H. C. Cruz *et al*. 1997. *Consumo y flujos de leña y otros combustibles en la micro región de Los Altos y Mixtepec del distrito de Zimatlán de Álvarez (Oaxaca)*, 30. Proyecto FAO, Semarnap TCP/MEX/4553(A).

Masera, O., J. Navia *et al*. 1997. *Patrones de consumo de leña en tres micro-regiones de México: síntesis de resultados*. Proyecto FAO/México "Dendroenergía para el desarrollo rural", 42. México.

Mathews, A. S. (2003a, 19 de noviembre). Fighting fire and preserving ignorance in the pine-oak forests of Oaxaca [ponencia]. *102.a Reunión Anual de la American Anthropological Association*. Chicago.

Mathews, A. S. 2003b. Suppressing fire and memory: environmental degradation and political restoration in the Sierra Juárez of Oaxaca, 1887-2001, *Environmental History*, *8*(1), 77-108.

Mathews, A. S. 2005. Power/knowledge, power/ignorance: forest fires and the state in Mexico. *Human Ecology*, *33*(6), 795-820.

Mejía Fernández, L. 1988. *La política forestal en el desarrollo de la administración pública forestal* [Tesis de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chapingo].

Moore, D. S. 1998. Clear waters and muddied histories: environmental history and the politics of community in Zimbabwe eastern highlands, *Journal of Southern African Studies*, *24*(2), 377-403.

Moore, S. F. 2001. The international production of authoritative knowledge: the case of drought stricken West Africa, *Ethnography*, *2*(2), 161-189.

Morris, S. D. 1991. *Corruption and politics in contemporary Mexico*. University of Alabama Press.

Negreros, P. y L. K. Snook. 1984. Análisis del efecto de la intensidad de corta sobre la regeneración de pinos en un bosque mezclado de pino-encino. *Ciencia Forestal*, *47*, 48-61.

Nikinmaa, E. 2001. *Plan estratégico forestal para México 2020. Versión 1.0*, 27. Indufor.

Nugent, D. 1994. Building the state, making the nation: the bases and limits of state centralization in 'modern' Peru. *American Anthropologist*, *96*(2), 333-369.

Paz, O. 1976. *El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económica.

Peña, G. de la. 1992. Populism, regional power, and political mediation: Southern Jalisco, 1900-1980. En E. van Young (coord.). *Mexico's regions: comparative history and development* (191-223). Center for U.S.- Mexican Studies, UCSD.

Poder Ejecutivo Federal de México. 1995. *Programa forestal y de suelo 1995-2000*.

Profepa. 1997. Informe trianual 1995-1997. Semarnap / Profepa.

Robbins, P. 1998. Paper forests: imagining and deploying exogenous ecologies in arid India. *Geoforum*, *29*(1), 69-86.

Robbins, P. 2000a. The rotten institution: corruption in natural resource management. *Political Geography*, *19*(4), 423-443.

Robbins, P. 2000b. The practical politics of knowing: state en-vironmental knowledge and local political economy, *Economic Geography*, *76*(2),126-144.

Rodríguez, V. E. 1999. *La descentralización en México: de la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo federalismo*. Fondo de Cultura Económica.

Saberwal, V. K. 1997. Bureaucratic agendas and conservation policy in Himachal Pradesh, 1865-1994, *The Indian Economic and Social Review*, *34*(4), 466-498.

SARH. 1979. *Desarrollo forestal*. Subsecretaría Forestal y de la Fauna, Dirección General para el Desarrollo Forestal.

Scott, J. C. 1969. The analysis of corruption in developing nations, *Comparative Studies in Society and History*, *11*(3), 315-341.

Scott, J. C. 1998. *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Semarnap. 1996. Norma Oficial Mexicana NOM-012-RECNAT-1996, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento de leña para uso doméstico.

Semarnap. 1997a. *Anuario estadístico de la producción forestal*.

Semarnap. 1997b. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales.

Semarnap. 1999. *Estadísticas del medio ambiente 1999: Producción forestal, 1986-1998*. http://www.semarnat.gob.mx/estadisticas_ambientales/compendio/indice/in dex.shtml

Semarnap. 2001a. *Estructura orgánica de Semarnap.*

Semarnap. 2001b. *Estructura orgánica de Semarnat*.

Semarnap. 2003. *Estadísticas del medio ambiente 1999: producción forestal, 1986-1998*. httpz//www.semarnat.gob.mx/estadisticas_ambientales/compendio/indice/index.shtml

Smith, P. H. 1979. *Labyrinths of power: political recruitment in twentieth century Mexico*. Princeton University Press.

Snook, L. K. 1986. *Effects of Mexico's selective cutting system on pine regeneration and growth in a mixed pine-oak (Pinus-quercus) forest*. Reporte técnico, USDA Forest Service General, SE-46: 27-31.

Van Ufford, P. Q. 1993. *Knowledge and ignorance in the practices of development policy. an anthropological critique of development: the growth of ignorance*. Routledge.

Vries, P. de. 2002. Vanishing mediators: enjoyment as a political factor in Western Mexico. *Ethnology*, *29*(4), 901-27.

VV. AA. 1958. Tala de bosques en diferentes partes del estado. AGEO, Asuntos Agrarios, Serie V. Problemas por bosques. Legajo 896, expediente 9, 11.

Ward, P. M. y V. E. Rodríguez. 1999. New federalism, intergovernmental relations and co-governance in Mexico. *Journal of Latin American Studies*, *31*(3), 673-710.

Weber, M. 1978. *Economy and society.* University of California Press.

Wolf, E. R. 1956. Aspects of group relations in a complex society: Mexico. *American Anthropologist*, *58*(6), 1065-1078.

13. Economía política de los derechos de propiedad cambiantes: el desmantelamiento de un patrimonio pastoral comunal[1]

Jean Ensminger y Andrew Ruttan

Resumen: El crecimiento económico ha llevado al colapso de los sistemas de pastoreo comunales en muchas sociedades pastoriles en África. Estos sistemas continúan fallando porque la diferenciación y la diversificación económica impiden que los pastores se pongan de acuerdo en un sistema de reemplazo. Hemos desarrollado un nuevo modelo institucional para este proceso. Nuestro análisis se centra en los cambios en la economía y en la política de los derechos de propiedad pastoriles y en las actitudes públicas en relación con la distribución de los costos y beneficios de esos cambios. Aplicamos nuestro modelo al caso de los orma galole de Kenia.

Palabras clave: Nueva economía institucional, economía política, bienes comunales, pastoreo, África, derechos de propiedad.

El crecimiento económico ha traído cambios dramáticos a las sociedades pastoriles.[2] Uno de los múltiples efectos indirectos del crecimiento

1 Publicado originalmente en: Jean Ensmingerand y Andrew Rutten, 1993, "The politics of changing property rights: dismantling a commons from within", *American Ethnologist*, 18(4): 683-699.

2 Con *crecimiento económico* nos referimos a crecimiento en la producción total de una sociedad, con independencia de la distribución.

económico es la mayor sedentarización.[3] La sedentarización, a su vez, aumenta la amenaza de sobrepastoreo, lo que vuelve inviables a muchos sistemas comunales de pastoreo. Aunque en el pasado estos sistemas se cambiaban de manera rutinaria para evitar el sobrepastoreo, los pastores han tenido menos éxito recientemente en la reestructuración de sus sistemas de bienes comunales.

La raíz de su fracaso se encuentra en los cambios económicos y políticos que trae consigo el crecimiento económico. El crecimiento económico ha aumentado las ganancias obtenibles, lo cual ha desmantelado los bienes comunales, a la vez que ha complicado el ponerse de acuerdo sobre cómo distribuir esas ganancias. La sedentarización ha aumentado los costos de mantenimiento del pastoreo comunal, y la creciente diversificación económica en las sociedades de pastoreo ha creado grupos que quieren derechos de propiedad muy distintos. Al mismo tiempo, la sustitución de los Gobiernos locales por el Gobierno nacional ha cambiado el equilibrio de poder dentro de los grupos, así como entre ellos. Para ilustrar los cambios en las economías y políticas de la propiedad comunal en las sociedades pastoriles, examinamos el caso de los orma galole de Kenia.

Los orma del noreste de Kenia son pastores ribereños. Son un pueblo islámico, hablantes de cushitic oriental, del grupo lingüístico oromo. Los orma, junto con los boran y otros, fueron parte de la gran expansión oromo de finales de finales del siglo XVI, que inundó gran parte de Etiopía del sur y del noreste de Kenia. La patria actual de los orma es el distrito del

3 Hay quienes argumentan que muchos de los cambios que describimos en este artículo podrían haber sido impulsados por la presión demográfica y no por el crecimiento económico. Cierto es que la presión demográfica puede inducir muchos de los cambios en derechos de propiedad que observamos aquí, y por muchas de las mismas razones inmediatas (por ejemplo, el aumento en el valor de la tierra). En este caso particular, sin embargo, sentimos que se puede argumentar con solidez a favor de que el crecimiento económico en sí mismo explica mucho del cambio. La población humana en 1980 de la zona orma galole que estudiamos era de aproximadamente 2 232 miembros, mientras que la población en 1987 era de 2 414, lo cual representa un aumento de sólo 8.2% a lo largo de siete años. Sin embargo, el crecimiento demográfico fue mayor a este y resultó en una migración neta a pueblos cercanos más grandes. Para nuestros motivos, la población de ganado en realidad es la variable más significativa, y esta población, de hecho, tuvo un declive a lo largo del periodo (de aproximadamente 24%) debido a la sequía severa de mediados de la década de los ochenta.

río Tana, en Kenya, en la ribera oeste del río Tana, con una concentración particularmente densa en el delta del río Tana y algunos asentamientos en el distrito Lamu al este del Tana. Los orma dependen en gran medida del ganado vacuno y, en menor medida, de ganado más pequeño (ovejas y cabras), y prácticamente no hay camellos. La producción pastoril se complementa cada vez más con la agricultura a lo largo de las planicies fluviales del río Tana y los múltiples ríos estacionales que atraviesan el territorio de oeste a este.

Los orma galole habitan la porción media del distrito del río Tana a lo largo de las riberas del río Galole que va del este al oeste, que se junta con el Tana en Hola. En 1979, 39% de los hogares galole se asentaban en aldeas que contaban con tiendas y se integraban bien en la economía de mercado como productores comerciales de ganado. El otro 61% se involucraba menos en la economía de mercado y eran nómadas hasta cierto grado. Los hogares fuera del pueblo por lo general eran más autosuficientes a la hora de satisfacer sus necesidades de subsistencia, que seguían consistiendo principalmente en leche y productos ganaderos. De manera sorprendente, para 1987, 63% de los galole se había asentado en pueblos mercantiles. Aunque a menudo pensamos en la sedentarización como sinónimo de una transición a la agricultura, este no fue el caso con los orma. Aunque sigue en aumento la agricultura en las planicies fluviales a lo largo del río Galole, río por lo demás estacional, esta es bastante precaria y, a grandes rasgos, todos los hogares siguen practicando el pastoreo.

Durante este periodo creció la renta de los orma, como la de muchos kenianos. Entre los países africanos, Kenia ha tenido una tasa relativamente alta de crecimiento económico. Entre 1965 y 1980, el crecimiento se mantuvo en un promedio de 6.4% al año, mientras que de 1980 a 1987 tuvo un promedio de 3.8% al año (Banco Mundial, 1989). Los orma también obtuvieron su parte, como se refleja en el crecimiento de 37% en su ingreso real per cápita entre 1980 y 1987 (Ensminger, 1996), a pesar de pérdidas de 70% en poblaciones bovinas durante la sequía de 1984.

Los orma ilustran la influencia del crecimiento económico en los derechos de propiedad en economías pastoriles. Los orma, como la mayoría

de los pastores africanos, desarrollaron un complejo sistema de derechos de propiedad. La tenencia de la tierra consistía en el pastoreo compartido abierto a todo el grupo étnico. Hasta épocas recientes, se evitaba el sobrepastoreo por medio de la expansión territorial y el control del acceso al agua. A diferencia de las tierras de pastoreo, los pozos, que se volvían a excavar cada temporada en ubicaciones específicas en caudales secos, no eran propiedad comunal, sino de quien los hubiera excavado por primera vez y sus descendientes del linaje paterno. A medida que las personas se fueron asentando, estas opciones ya no fueron efectivas y los orma tuvieron que desarrollar nuevos métodos para impedir el sobreuso de la tierra, lo cual lograban por medio de la imposición de restricciones al acceso a los bienes comunales cerca de las aldeas sedentarias. Estas restricciones funcionaron con bastante efectividad en la ausencia de una jurisdicción por parte de terceros hasta mediados de la década de los ochenta. Pero, para entonces, el amplio apoyo a las restricciones se había empezado a desmoronar debido a los intereses divergentes de algunos productores de ganado sedentarios con orientaciones comerciales frente a los productores nómadas, orientados a la subsistencia (Johnson y Libecap, 1982; Libecap, 1989). La presión que ejercen otros grupos sobre la tierra orma se sumó a esta tendencia. Los productores relativamente sedentarios se han valido de las políticas del Gobierno nacional a favor de la sedentarización para ejercer sus derechos de propiedad restrictivos en contra de los productores nómadas orientados a la subsistencia. El resultado ha sido un desmantelamiento gradual de los bienes comunales en beneficio de los productores sedentarios.

El marco teórico que empleamos para analizar estos cambios deriva del nuevo institucionalismo (Eggertsson, 1990; North, 1981; 1990), una perspectiva cuya premisa viene de la suposición de que las instituciones influyen en las decisiones, que las personas se dan cuenta de ello y que intentan estructurar las instituciones para sus propios fines (Bates, 1981; 1989).[4] Aunque algunas instituciones existen en esencia para canalizar conductas con apego a las normas religiosas e ideológicas, aquí nos

4 Por *instituciones* aquí nos referimos a "las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente […] las restricciones desarrolladas por humanos que dan forma a la interacción humana" (North, 1990: 2).

concierne más el fenómeno explícitamente económico. Desde esta perspectiva, el análisis de la elección de instituciones es un proceso en tres pasos. El primer paso es analizar las distintas instituciones posibles y determinar cómo distribuyen los costos y beneficios entre la sociedad. El segundo es evaluar las ideologías actuales respecto a la distribución legítima de los costos y beneficios. Juntos, estos pasos determinan quiénes querrán qué instituciones. El tercer paso es considerar las políticas de las instituciones o la manera en la que el sistema político atiende los deseos de los distintos grupos involucrados. La política determina de qué forma los distintos grupos controlan los resultados.[5]

El nuevo institucionalismo debería interesarle a los antropólogos por varias razones.[6] Los nuevos institucionalistas no sólo examinan sujetos de interés para los antropólogos, que abarcan desde la evolución de la cooperación (Axelrod, 1984; Schofield, 1986; Taylor, 1982; 1987) hasta las condiciones que permitirán que los mercados evolucionen (North, 1977), sino también, lo que es más importante, aunque mantienen el enfoque económico general hacia el comportamiento humano, abandonan muchas de las suposiciones que han molestado a los antropólogos: las transacciones sin costo, la racionalidad e información perfecta, y el interés económico estrecho en beneficio propio (Goldberg, 1981: 378). Esto los aleja de manera significativa de análisis neoclásicos al subrayar el significado de las instituciones y la ideología (Higgs, 1987; 1989; Hinch y Munger, 1992; 1994; North, 1981; 1990; Siegenthaler, 1989). El enfoque en los detalles de la estructura institucional que resulta le da un sabor distintivamente

5 Típicamente, los economistas y politólogos consideran que el cambio institucional es un proceso en dos fases, ya que suponen, por lo regular de manera implícita, que las personas querrán en automático las instituciones que aseguren el mayor retorno económico (véanse, por ejemplo, Gilligan *et al*., 1989). Modificamos el enfoque para permitir preferencias de distribución alternativas, para ser más consistentes con la realidad empírica. Al hacerlo, ampliamos en gran medida el rango potencial de análisis al que se puede aplicar este enfoque.

6 La nueva economía institucional como es practicada por los historiadores económicos debería ser de interés particular para los antropólogos (véanse el número del simposio de 1989 del *Journal of Institutional and Theoretical Economics* [Furubotn y Richter, 1989]; Eggertsson, 1990; Higgs, 1987; 1989; Libecap, 1989; North 1981; 1990). Entre los nuevos institucionalistas, los historiadores económicos son los más parecidos a los antropólogos: se enfocan, por ejemplo, en el proceso de cambio y desarrollo institucional, y muchos son sensibles a la importancia de la ideología y del proceso político.

antropológico a mucha de su obra (Cheung, 1973; Ellickson, 1986; Ostrom, 1990). Por supuesto, todavía no brinda (y quizá nunca lo haga) algo parecido a una teoría general de las instituciones sociales. Sin embargo, puede aportar mucho a nuestra comprensión de la historia reciente de los derechos de propiedad pastoriles en África.

Las conclusiones a las que llegamos al utilizar este enfoque atraviesan distintas fronteras académicas. Al igual que muchos economistas y propulsores de la teoría de la "tragedia de los bienes comunes" (Hardin, 1968; Hardin y Baden, 1977), creemos que la viabilidad de las sociedades pastoriles se relaciona con los incentivos que brindan sus sistemas de derechos de propiedad y políticos. Los teóricos de la tragedia creen que la propiedad comunal de la tierra, aunada a la propiedad privada del ganado y la ausencia de un Estado fuerte, crea incentivos para degradar el ambiente. Sin embargo, a diferencia de aquellos académicos, nosotros no vemos la propiedad comunal como algo necesariamente problemático en las sociedades pastoriles. De hecho, creemos que la nueva economía institucional demuestra que a menudo los bienes comunales tienen una razón de ser económica sólida. Al igual que muchos antropólogos (McCay y Acheson, 1987), nosotros consideramos que existen demasiados casos registrados de sistemas de propiedad comunal exitosos como para aceptar el análisis de la tragedia. Sin embargo, a diferencia de otros antropólogos (Peters, 1987), no consideramos que esto constituya un argumento para rechazar la idea de la decisión racional. En cambio, creemos que los economistas y teóricos de la tragedia se equivocan porque no han logrado crear modelos adecuados de sistemas de propiedad pastoril comunal. Su error sólo evidencia el argumento de los nuevos institucionalistas de que los economistas neoclásicos no logran considerar las instituciones de modo adecuado. Por último, a diferencia de muchos de los analistas en derechos de propiedad (Demsetz, 1967; Williamson, 1985, en contratos), no afirmamos nada respecto a la adecuación de los derechos de propiedad ni sobre su compatibilidad con el crecimiento económico a largo plazo (Binger y Hoffman, 1989; North, 1981; 1990). En realidad, argumentamos que el papel de la política hace que tales aseveraciones sean problemáticas. Las decisiones políticas dependen de la estructura política, así como de lo que

quiere el pueblo (Bates, 1981); la forma en la que se toman las decisiones puede determinar qué decisiones se toman (Riker, 1980; 1986). Es justo por esta razón que el cambio institucional no necesariamente enriquece el desempeño económico.

Existen similitudes obvias entre nuestras conclusiones y las de los neomarxistas y otros analistas contemporáneos del Estado (véase, por ejemplo, Evans *et al*., 1985).[7] Nosotros también rehuímos de la noción clásica marxista de clase como una categoría de análisis y en cambio nos enfocamos en el conflicto entre grupos dentro de las clases. También coincidimos con ellos en que el Estado no puede ser mirado simplemente como un agente pasivo de la dominación de clase. En cambio, vemos el Estado a la vez como un actor autónomo y como una entidad sujeta de ser captada por grupos, incluyendo las diversas facciones dentro de cualquier clase.

Pero a pesar de estas similitudes, hay diferencias reales entre nuestros abordajes. Los neomarxistas empiezan con grupos (aunque no necesariamente las clases de Marx y Engels) y analizan sus interacciones;[8] nosotros empezamos con individuos (si bien son individuos insertados en un contexto social y económico específico) y vamos partiendo de ahí. Por ende, aunque reconocemos la importancia de los grupos, consideramos que es más fructífero no darlos por sentado. En cambio, consideramos de forma explícita las condiciones bajo las cuales los individuos se unen como integrantes de grupos y las condiciones en las cuales no lo harán (o dejarán de participar en grupos que han formado).[9] Por ejemplo, en el caso de los galole, vemos que la preferencia por ciertos derechos de propiedad no se

7 Para una mayor discusión de las similitudes y diferencias entre las posiciones de los neomarxistas y las posiciones similares a la nuestra, véanse Bates (1983: 134-147), Levi (1988: 185-204), North (1986), Przeworski (1985) y Roemer (1982).

8 Desde luego, hay excepciones; Jon Estler, la más obvia (Elster, 1985).

9 Nuestra postura aquí es en extremo parecida a la de Skocpol, quien lo plantea de la siguiente manera: "Los marxistas podrían tener razón al argumentar que las clases y las tensiones de clase siempre están presentes en las sociedades industriales, pero la expresión política de los intereses y conflictos de clase nunca es automática ni está ecológicamente determinada. De forma directa o indirecta, las estructuras y actividades de los Estados condicionan profundamente dichas capacidades de clase. Por tanto, la sabiduría clásica de la sociología política marxista debe ser volteada, si no de cabeza, en definitiva de un costado" (1985: 25).

basa en simples diferencias de intereses de clase tanto como en intereses económicos y alianzas familiares.

Nuestro abordaje es útil en particular para analizar el camino del cambio institucional. Por ejemplo, nos permite explicar por qué los sistemas de propiedad comunal funcionaron tan bien en el pasado, pero están cediendo el paso a alternativas. Un nuevo análisis institucional aporta mucho a la explicación de la naturaleza y la temporalidad de los cambios institucionales. Estos cambios reflejan cambios en costos de transacción, precios relativos, y en la repartición de la carga de la implementación. Nuestro abordaje, sin embargo, no toma en cuenta las preferencias.

Derechos de propiedad, política y crecimiento económico

Los derechos de propiedad, la política y el crecimiento económico se hallan entrelazados de manera indisoluble. Mucho se ha dicho sobre el papel de los derechos de propiedad, que son reglas sobre el control de los recursos, para determinar el rumbo del crecimiento económico. Desafortunadamente, poco se ha dicho del papel del crecimiento económico para la determinación de la viabilidad a largo plazo y la adaptabilidad de los derechos de propiedad. De hecho, a menudo se supone que los derechos de propiedad se ajustan en automático a las circunstancias económicas cambiantes (Netting, 1982; North y Thomas, 1973). Las ventajas que traen consigo tales ajustes son evidentes, pero los ajustes, evidentemente, tampoco son automáticos. Para entender por qué no lo son, debemos examinar cómo el crecimiento económico cambia la efectividad y la adaptabilidad de los derechos de propiedad.

Los derechos de propiedad efectivos son esenciales para la viabilidad a largo plazo y el éxito de una sociedad. Permiten que la gente aproveche las ganancias de la cooperación. Cuando los derechos de propiedad no están especificados o implantados por completo, las personas están cediendo ganancias (a veces evidentes) de la cooperación. A pesar de estas pérdidas, los derechos de propiedad incompletos no necesitan ser irracionales, paradójicos o imperfectos. Hay buenos motivos para que los derechos de

propiedad no estén perfectamente especificados o implantados (Barzel, 1989). Lo más importante es que resulta costoso especificar, monitorear y ponerlos en marcha. Los bienes tienen muchas características; para ser completos, los derechos tendrían que establecerse e implantarse sobre toda característica valiosa de todos los bienes. Sin embargo, en el mundo real no solo es costoso determinar qué bienes son valiosos y deben protegerse, sino también imponer el cumplimiento y castigar a los infractores. Debido a estos costos, que los economistas llaman costos de transacción, los derechos de propiedad nunca están especificados ni implantados en su totalidad, ni sería rentable que lo fueran.[10] En consecuencia, al mantenerse igual todo lo demás, los bienes y las características que no son controladas serán sustituidas por las que sí lo son.

Como los derechos de propiedad deben estar dirigidos a circunstancias económicas particulares, los cambios en las circunstancias cambiarán la efectividad de ciertos derechos. Al aumentar el uso de bienes que no cuentan con derechos de propiedad, el crecimiento puede aumentar el costo de no tener derechos de propiedad. Quizá el mejor ejemplo de esto es la contaminación del aire y el agua alrededor de las ciudades; hasta hace poco, los niveles de contaminación eran tan bajos que los derechos de propiedad no eran necesarios. El crecimiento también puede afectar los derechos de propiedad que existen y que se implantan. Si el crecimiento aumenta los beneficios obtenidos al hacer trampa, ya sea aumentando el valor del bien o reduciendo la probabilidad de ser descubierto, podría promover que se haga trampa. Mucho del aumento reciente en la caza furtiva para el marfil, por ejemplo, ha estado vinculado al aumento en el valor del marfil. Al final, el fortalecimiento de instituciones como los juzgados y de la infraestructura como las calles que a menudo acompaña el crecimiento puede cambiar los costos de transacción incurridos al instaurar derechos de propiedad. Por tanto, donde alguna vez la falta de carreteras dificultó la implantación de derechos de propiedad en la tierra, una mejor infraestructura podría abrir paso a la privatización como una alternativa a la tenencia comunal.

10 Para una discusión en particular clara de costos de transacción, véase Goldberg (1989, ch. 1.3)

Hasta ahora hemos ignorado la pregunta de qué derechos de propiedad quiere la gente. Los economistas suponen que las personas querrán los derechos de propiedad que maximicen la producción neta. De otra manera, se razona, las personas estarían sacrificando ganancias; la posibilidad de captar estas ganancias sería un incentivo poderoso para la reestructuración de los derechos de propiedad. Pero este argumento ignora el papel de la ideología y la política en la determinación de los derechos de propiedad.

La ideología moldea las preferencias en los derechos de propiedad al hacer que la gente considere más que sus pequeñas ganancias al evaluar distintos sistemas de derechos. En particular, a la gente podría interesarle asegurar que las recompensas económicas se distribuirán de manera justa dentro de la sociedad. Los economistas reconocen que algunas personas están más motivadas por su propio interés personal, pero rechazan que ellas determinen la estructura de los derechos de propiedad. Argumentan que incluso cuando las personas son egoístas la competencia obliga a que todos sean egoístas al recompensar el egoísmo. La competencia brinda un incentivo poderoso a todas las personas para ignorar factores como la imparcialidad.[11] Aunque este razonamiento puede aplicarse a los derechos de propiedad, como son los contratos, que se desarrollan en mercados competitivos, muchos derechos de propiedad importantes no se sujetan sólo a las presiones del mercado.[12] En algunos entornos pueden sobresalir las consideraciones ideológicas.

Es probable que la ideología sea en especial importante cuando se trata de los derechos de propiedad que se determinan políticamente. De hecho, hay buenos motivos para creer que la política no imita el mercado, incluso cuando los intereses de las personas son muy personales. En la medida que

11 La cuestión de qué tan deseable en lo económico son los distintos derechos de propiedad es compleja en esta instancia. Los derechos de propiedad que distribuyen recompensas de manera relativamente equitativa podrían en realidad llevar a una mayor producción que aquellos que no, dado que la mayor legitimidad brindada por una distribución más equitativa podría reducir el que se haga "trampa" al grado en que el desempeño general sea mejor. En otras palabras, los ahorros en costos de transacción (debido a la reducción en negociaciones, monitoreo e implantación) superan las pérdidas en potencial subutilizado.

12 Sin embargo, un cuerpo teórico creciente sugiere que las personas toman en cuenta la imparcialidad incluso en los mercados (véase, por ejemplo, Kahneman *et al*., 1986).

sea el caso, las consideraciones políticas afectarán las decisiones sobre los derechos de propiedad. El resultado podrían ser derechos de propiedad que disminuyen el desempeño económico.

La política es el proceso por medio del cual los deseos de los integrantes del grupo se convierten en decisiones colectivas. La estructura política determina qué tanta influencia tendrá cada integrante sobre cualquier desenlace particular. Los problemas políticos solo ocurren si los individuos están en desacuerdo respecto a alguna política; cuando todos están de acuerdo, es evidente la decisión colectiva. Cambiar los derechos de propiedad quizá causará extensos desacuerdos, dado que los derechos de propiedad nunca son neutrales en sus efectos económicos y cambiarlos crea ganadores y perdedores. Mientras nadie quiera ser un perdedor, las personas estarán en desacuerdo respecto a qué derechos de propiedad deben cambiarse o elegirse.

Desafortunadamente, un desacuerdo extenso complica el análisis de las decisiones colectivas. De hecho, las investigaciones formales sobre decisiones políticas han descubierto que tales decisiones dependen de forma crucial de la estructura política: para la misma configuración de deseos individuales, suele ser posible obtener muchas decisiones diferentes al cambiar las reglas empleadas en la toma de decisiones (Riker, 1980). Los cambios radicales en los desenlaces son causados no solo por el tipo de cambio en el sistema político en el que se sustituye una monarquía por una democracia, sino también al mantener el sistema igual pero hacer cambios relativamente menores en los procedimientos, como reordenar la secuencia en la que se votan los asuntos (Riker, 1986). Resulta claro, entonces, que el análisis de los detalles de la estructura institucional, ya sea formal o informal, es crucial para entender la política.

En una variedad de maneras, el crecimiento económico disminuye la capacidad del sistema político para resolver los conflictos en torno a los derechos de propiedad. Un aumento en la especialización y en la división del trabajo trae consigo un aumento en la diferenciación económica, en la que cada grupo potencialmente querrá unos derechos de propiedad que lo favorezcan. El crecimiento también crea ganadores y perdedores. Ya que

cambiar de una estrategia económica perdedora a una ganadora puede ser costoso por sí mismo, los perdedores tienen un incentivo para buscar en la política la manera de revertir sus pérdidas a un menor costo. El crecimiento también cambia la estructura política. En particular en naciones en vías de desarrollo, el Gobierno nacional tiende a expandirse a costa del Gobierno local. Con mejoras en el transporte y en la comunicación, los Gobiernos nacionales han podido aumentar el alcance de su autoridad. Las coaliciones que controlan la política nacional a menudo son muy distintas de las que controlan los gobiernos locales.

¿Qué debemos concluir con esto? La complejidad del mundo dificulta el diseño de derechos de propiedad que promuevan el desempeño económico y a la vez cumplan con dictados socialmente deseables en cuanto a la distribución. Como son costosos de negociar, monitorear y poner en marcha, los derechos de propiedad nunca están completos, sino que se enfocarán en algunas características altamente valoradas en las que el cumplimiento ocurre fácil. Tales esquemas son particularmente sensibles a cambios en el costo relativo de incumplir con las restricciones a esas características. Cuando los derechos de propiedad, por cualquier motivo, resultan en grandes pérdidas económicas, las pérdidas crean un incentivo para cambiar los derechos. Si los derechos cambian y cómo lo hacen dependerá no solo de los incentivos económicos, sino de las perspectivas ideológicas y la estructura política. Dado que no hay garantía de que la ideología o las estructuras políticas vayan a depender por sí mismas de consideraciones preponderantemente económicas, los derechos de propiedad resultantes podrían disminuir el desempeño económico.

La economía política del pastoralismo

A la economía política de las sociedades pastoriles las distingue una dependencia en la tenencia comunal de la tierra, la tenencia a título individual del ganado y la ausencia de un Estado fuerte. Muchos investigadores identifican estas características como la fuente de los problemas recientes que enfrentan los pastores. Dado el deseo de cada individuo de construir un rebaño más grande, la propiedad comunal, al no lograr brindar incentivos para conser-

var la tierra, conduce a la tragedia de los bienes comunes (Hardin, 1968), o al sobreuso destructivo de la tierra. Según los teóricos de la tragedia, la ausencia de un Estado fuerte limita la capacidad de las sociedades pastoriles de aplicar cualquier decisión colectiva y, por ende, obstaculiza el desarrollo de derechos de propiedad más efectivos. Ambas conclusiones carecen de fundamento. Un análisis más profundo demuestra que estas características no necesariamente tienen tales efectos. De hecho, cuando se analiza de la manera correcta, el sistema de propiedad comunal pastoril parece una respuesta efectiva a las circunstancias económicas.

Los beneficios de la propiedad comunal de las tierras de pastoreo provienen de la ecología peculiar de las regiones áridas en África. Estas regiones se caracterizan por lluvias erráticas distribuidas de forma desigual, una condición climática que asegura que un pequeño pedazo de tierra no podrá sostener ganado a largo plazo. Además, la propiedad comunal obvia la necesidad de monitorear y volver aplicables derechos privados a las grandes parcelas de tierra que por ecología se necesitan. Estos beneficios no explican cómo los sistemas tradicionales evitaron la tragedia o por qué algunos de ellos ahora sucumben ante ella. Necesitamos un modelo de propiedad comunal que explique cuándo la propiedad comunal será trágica y cuándo no (Barzel, 1989).

La clave de dicho modelo subyace en una caracterización más global del proceso de producción pastoril. En el modelo de la tragedia, los únicos insumos en la producción de ganado son ganado y tierra. Cuando la tierra es gratuita, los pastores tienen un incentivo para darle un uso excesivo a la tierra al aumentar el número de ganado que llevan a ella. En realidad, la tierra no es el único factor cuya disponibilidad limitada constriñe la producción. Cultivar ganado en realidad requiere de muchos insumos además de la tierra, sobre todo agua y mano de obra. El resultado es que los pastores no necesariamente tienen un incentivo para usar más y más tierra nada más porque es gratuita. Por lo general, lo harán solo si el valor esperado de hacerlo (incluyendo el seguro) supera el costo. Aunque el costo marginal de la tierra es casi nulo, el valor marginal podría ser aún más bajo. Que lo sea depende del costo de los otros insumos requeridos para la producción de ganado.

La cantidad de ejemplares dependerá en parte del costo para el pastor de cada uno de los insumos. Además, el costo marginal de los insumos depende de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad pueden establecerse por encima del de alguno de los demás insumos, entonces el costo de usarlo se puede elevar lo suficiente para que no sea beneficioso el uso excesivo de los insumos sin dueño, como la tierra.

De hecho, podría ser menos costoso establecer derechos de propiedad sobre los demás insumos e implantarlos, que hacerlo con la tierra. Cuando este es el caso, podría tener sentido económico estructurar los derechos de propiedad de manera que la tierra sea gratuita.

Dichos mecanismos de protección se encuentran en la mayoría de las zonas pastoriles. Entre cualquier grupo pastoril, es probable que coexistan tipos de derechos de propiedad distintos. Algunos recursos pertenecen a individuos, otros a linajes y otros a la colectividad; algunos son de usufructo, otros de alquiler y otros de propiedad vitalicia. Además, la mayoría de los pastores tienen reglas que gobiernan el uso de los recursos durante emergencias, como sequías y epidemias. Tomados en su conjunto, estos factores vuelven poco probable que el modelo de tragedia, basado en suposiciones demasiado simplificadas sobre derechos individuales de propiedad vitalicia en el ganado y derechos comunales a la tierra, sea aplicable en sistemas pastoriles reales.

No es sorprendente que el agua sea el sujeto de muchos derechos complejos. Sin agua, incluso la tierra gratuita deja de tener valor para un pastor. En regiones áridas, el acceso al agua durante la temporada seca es fácil de controlar, ya que a menudo existe un número limitado de fuentes. En estas zonas, las fuentes de agua durante la temporada seca a menudo no tienen dueños comunales (Gulliver, 1972: 37, para los turkana; Helland, 1980, para los boran; Lewis, 1961: 34, para los somalí). Algunos pastores controlan insumos más allá del agua. Por ejemplo, en aquellas zonas donde se permite que se junte el ganado de distintos dueños, sus dueños deben contar con permiso de acceso al rodeo anual; en zonas donde la producción se comercializa, el acceso al mercado está controlado (Dennen, 1976).

La historia reciente de Botswana brinda evidencia sorprendente respecto a la eficacia de controles complementarios (Hitchcock, 1985; Peters, 1984). En Botswana, los planificadores de desarrollo notaron que una falta de agua limitaba el número de ganado. Para solucionar el problema, empezaron un programa de pozos de perforación. Tal como se planificó, el programa aumentó de forma dramática la cantidad de agua disponible para los pastores y condujo a un aumento en la cantidad de ganado que criaban. También tuvo el efecto no planeado de conducir a un uso excesivo destructivo de la tierra. Sin embargo, esta era la consecuencia predecible de relajar la restricción —el acceso limitado al agua— que mantenía el valor de la tierra a la baja. Por tanto, el fracaso del programa de pozos de perforación fue un ejemplo no de la tragedia de los bienes comunales, sino de la tragedia de hacer común lo que alguna vez fue propiedad privada.[13]

Muchas sociedades pastoriles precoloniales africanas se distinguían no sólo por la presencia de propiedad comunal de la tierra, sino por la ausencia de un Estado. La mayoría de los grupos pastoriles contaba con algún cuerpo que tomaba las decisiones colectivas, como un consejo de ancianos; sin embargo, pocos disponían de una institución central para vigilar la puesta en práctica de esas decisiones. Tal como la propiedad comunal de la tierra, este sistema tenía sentido económicamente. Sin embargo, parece haber dejado a las formas de gobierno pastoriles sin poder para aplicar las decisiones colectivas. No obstante, un sinnúmero de estudios antropológicos de sociedades sin Estado demuestra que la ausencia de un Estado no necesariamente implica desorden. La ausencia de Estado no significa ausencia de implementación sino la descentralización (o la privatización) de esa implementación (Eggertsson, 1990: 9; Taylor, 1982). En vez de depender de especialistas externos para poder aplicar los acuerdos colectivos, los ciudadanos de sociedades sin Estado deben depender unos de los otros.

13 Irónicamente, muchos de los pozos de perforación cayeron a la postre en abandono, víctimas a su vez de una tragedia de los bienes comunales.

La implementación privada descentralizada no funcionará a no ser que los ciudadanos comunes quieran aplicar las decisiones colectivas.[14] Deben también contar con los medios para hacerlo y deben saber quiénes han roto las reglas y por tanto deben ser castigados. Avances recientes en la teoría de juegos sugiere que estas condiciones se pueden cumplir cuando las personas deben lidiar con ciertas personas en repetidas ocasiones (Axelrod, 1984; Taylor, 1982: 1987): cuando las personas juegan algo una y otra vez pueden castigar a los infractores negándose a tratar con ellos en el futuro; además, en pequeños grupos es relativamente fácil determinar quién hace trampa y quién no (Hechter, 1987).

Quizá la consecuencia más importante de la implementación descentralizada es que limita el rango de decisiones políticas posibles. Cualquiera que no esté contento con una decisión colectiva puede negarse a implantarla (Bailey, 1965) y como resultado, las decisiones que favorecen a una parte de la colectividad a costa de otra, sin una compensación aceptable, son imposibles de implantar. Por tanto, la necesidad de un apoyo amplio podría limitar el grado de desigualdad inducida de forma política. Esto no implica necesariamente igualdad, como han sugerido algunos teóricos (Taylor, 1982). Al final, las personas pueden aceptar resultados desiguales siempre y cuando sean producto de un juego limpio dentro del margen de reglas aceptadas. Sin embargo, sí parece poco probable que las personas acepten una desigualdad basada en una manipulación del sistema político. Por tanto, *ceteris paribus*, la descentralización implica que es menos probable que las desigualdades estén basadas en decisiones políticas que en motivaciones económicas o ideológicas.

El crecimiento económico y el surgimiento del conflicto

El crecimiento ha alterado de forma dramática las economías pastoriles al convertir la producción comercial en algo más factible y rentable. En muchas sociedades pastoriles esto ha provocado un aumento en la di-

14 Esto no significa que la puesta en marcha deba ser unánime o que todos los integrantes de la sociedad deban estar involucrados de igual manera. Por ejemplo, podría haber diferencias relacionadas con la edad, el género, la riqueza, la estrategia económica y el estatus político. No obstante, es una característica de la implementación descentralizada que el grupo que la pone en marcha esté distribuido de manera bastante amplia alrededor de la sociedad.

versidad, por lo que algunas personas se han convertido en productores comerciales, comerciantes, campesinos y jornaleros, mientras que otros continúan enfocados en la producción pastoril de subsistencia. El resultado es un menor consenso respecto a las formas de derechos de propiedad que son apropiadas. Está en aumento la producción pastoril para venta en el mercado, que no se guarda para el consumo doméstico. Las necesidades de los productores comerciales de carne de res son muy distintas a las de los nómadas orientados a la subsistencia. Por tanto, los dos grupos quieren sistemas de derechos de propiedad muy distintos.

El surgimiento de un sector comercial se puede rastrear directamente a los cambios asociados al crecimiento económico, incluyendo un aumento en el tamaño relativo y absoluto de la población urbana. Dado que los habitantes de las ciudades no pueden cultivar su propia comida, sus necesidades alimenticias deben satisfacerse con la producción comercial de quienes aún practican la agricultura. El crecimiento también ha resultado en mejoras en la infraestructura (caminos, telecomunicaciones, transporte público, gobierno, servicios bancarios), incluso en zonas pastoriles. Además, la propagación de tiendas, así como el aumento en el uso del dinero y del crédito, permite que los pastores utilicen las ganancias de sus ventas. Con todo, estos cambios hacen que para algunos pastores sea beneficioso especializarse en la producción para el mercado nacional e internacional.

No obstante, en cualquier sociedad, a no todos los pastores les interesa por igual producir para el mercado. Aquellos con un acceso apropiado al ganado, a habilidades y a mano de obra y que prefieren la autoridad política descentralizada podrían todavía migrar y evitar en la mayor medida posible la dependencia del mercado para sus alimentos de subsistencia. Los factores vinculados al asentamiento y al involucramiento en el comercio incluyen una familiaridad con el lenguaje del comercio, relaciones familiares con comerciantes u otros sedentarios con buen nivel de vida, acceso al crédito, oportunidades laborales, disponibilidad de tierra ribereña arable, una estructura etaria en el hogar que dificulta el movimiento, enfermedades que hacen que el acceso a centros de salud cobre importancia, el deseo por la educación y el miedo a perder una tierra en la que no hay un asentamiento permanente. El hecho de que distintas poblaciones tengan

necesidades de tenencia muy distintas hace que sea cada vez más difícil llegar a un acuerdo sobre los derechos de propiedad.[15]

Crecimiento económico y resolución de conflictos

Además de un aumento en el conflicto en torno a las decisiones colectivas, el crecimiento ha cambiado los métodos para resolverlos. Los métodos empezaron a cambiar con la aparición del Estado moderno en regiones nómadas. En el transcurso de los últimos cincuenta años, los Gobiernos nacionales de África han ejercido cada vez más soberanía sobre las zonas nómadas (Ensminger, 1990). El grado en el que ejercen el control varía mucho, pero en la mayoría de las regiones ya hay una presencia nacional efectiva, si bien limitada, una presencia que ha resultado en varios cambios distintivos, cada uno con implicaciones importantes para la resolución del conflicto. En la mayoría de las regiones, el efecto preponderante ha sido el de sesgar las decisiones colectivas hacia políticas que favorecen a los productores comerciales a expensas de los productores de subsistencia.

Uno de los cambios más importantes ha sido el desarrollo de un nuevo método para aplicar las decisiones políticas. Con anterioridad argumentamos que la falta de jurisdicción de personas externas en sociedades sin Estado imponía límites a las decisiones políticas sustantivas que se podían tomar. Estos límites desaparecieron cuando el Estado sustituyó a los integrantes del grupo como los encargados de aplicar las decisiones colectivas. Con la puesta en marcha de las decisiones colectivas en manos de terceros, el grupo ya no está obligado a considerar solo las decisiones en las que se puede llegar a un acuerdo con un consenso bastante amplio y que se pueden aplicar de forma privada. En consecuencia, un grupo más pequeño puede dominar la toma de decisiones sin hacer las concesiones antes necesarias para obtener un apoyo más amplio.

Sin embargo, dicho esto, debemos tener en cuenta que incluso los Estados modernos no se rigen únicamente por restricciones formales

15 De ninguna manera sugerimos que hasta hace poco las sociedades pastoriles carecían de diferenciaciones. Sin embargo, argumentamos que dicha diferenciación ha *aumentado* en el ámbito económico y que, como resultado, hay un menor consenso respecto a los derechos de propiedad.

y la puesta en marcha por parte de personas externas. De hecho, como argumenta North (1990), mucha de la realización de contratos y derechos de propiedad proviene de restricciones informales. En muchos contextos, las personas no infringieron la ley aun cuando sabían que podían salirse con la suya, porque creían en su legitimidad y justicia. Por tanto, el grado de apoyo ideológico a ciertos derechos de propiedad y otras instituciones afectará en gran medida su cumplimiento y, por tanto, el desempeño económico. Suele convenir a quienes intentan dominar la toma de decisiones comportarse con cuidado e ir convenciendo a los demás de su perspectiva, aun cuando tienen las fuerzas policiacas del gobierno a su disposición. Una pérdida de apoyo ideológico no puede ser enteramente compensada por la autoridad por parte de agentes externos.

La sustitución de Gobiernos locales por nacionales tiene otras implicaciones. Una es aumentar la importancia de las políticas en el ámbito nacional. Quienes determinen qué políticas implanta el Estado podrán obtener decisiones que los favorezcan. El Gobierno nacional también abre la puerta para que el Estado decida las políticas sin considerar los deseos de los residentes locales. Sin embargo, por la misma razón que una minoría podría no desear sustituir la legitimidad ideológica con la fuerza al imponer una política totalmente guiada por sus propios intereses, de igual manera el Estado podría consentir en alguna medida a los intereses locales. Otra consecuencia de la aceptación del Gobierno estatal es el reconocimiento del monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza legítima. Esto en alguna medida ha disminuido la capacidad de los pastores de proteger las tierras de pastoreo de invasores.

La aceptación del Gobierno nacional también aumenta la vulnerabilidad a su sesgo urbano (Lipton, 1977), que resulta en la aprobación de una serie de leyes que no son consistentes con la continua viabilidad de los hogares nómadas y orientados a la subsistencia. Algunas leyes, como las establecidas en reservas de caza, esquemas de irrigación y ranchos privados, pueden beneficiar a personas externas a expensas de grupos locales. Otras, en cambio, favorecen a algunos integrantes del grupo local a costa de otros; por ejemplo, las leyes de educación obligatoria penalizan a los nómadas más que a los productores sedentarios, y los impuestos sirven en

su mayor parte para financiar servicios sociales que benefician de manera desproporcionada a los sedentarios.

Hasta ahora nuestra discusión sobre el proceso de los derechos de propiedad cambiantes ha sido bastante abstracta. Para hacerla más concreta y brindar más evidencia detallada, pasaremos a un caso singular, el de los orma galole del noreste de Kenia.[16] La historia de los derechos de propiedad entre los orma muestra de forma clara su relación con el crecimiento y la política.

La solución histórica de los orma al problema de los bienes comunales

Aunque las descripciones históricas de los orma durante los últimos siglos son escasos y brindan pocos detalles precisos sobre las prácticas de tenencia de la tierra, todo parece indicar que la tierra era poseída en común y el ganado de manera individual, como fue el caso en la mayoría de los grupos pastoriles de África del Este hasta décadas recientes. Los derechos por linaje Orma sobre el agua eran —y son— parecidos a los que se encuentran entre los boran (Helland, 1980: 65), de quienes se separaron los orma varios siglos atrás.

Desde los recuentos más tempranos, parece que los Orma dependían de la expansión militar para reducir las altas densidades en las tierras de pastoreo comunales. En la ausencia de escasez resultante, no existían problemas con los bienes comunales. Los orma, desde luego, no se encontraban solos entre los pastores al usar una estrategia como esta. Los somalí y los masai, entre otros, eran conocidos por haber expandido sus territorios durante la época de los esfuerzos británicos de pacificación a finales del siglo XIX. De hecho, estos tres grupos se encontraron a la postre en aventuras militares en el territorio orma.

16 Este estudio se basa en investigaciones con la población galole de Orma. Los orma se dividen en tres grupos, del norte al sur: los hirman, los galole y los chaffa. Por simplicidad, a partir de aquí nos referimos a la población en cuestión simplemente como los Orma.

Hasta la década de 1860, los orma tuvieron un excepcional éxito militar. Los oromo, originarios de Etiopía, comenzaron la expansión alrededor de 1500 y llegaron hasta Tanzania en dirección al norte, en menos de un siglo. La feroz postura militar de los orma también desalentó la invasión de extranjeros en el territorio, incluyendo a los comerciantes árabes de la costa, quienes solían ser agresivos (Lobo, 1984: 66; New, 1873: 161). Sin embargo, empezando en la década de 1850, los masai y los somalí, quienes también se encontraban en una postura de expansión, lanzaron ataques severos contra los orma desde el sur y desde el norte, respectivamente.

Mientras los orma tenían éxito militar, tenían poca necesidad de desarrollar mecanismos para regular el pastoreo. Además, las derrotas de mediados del siglo XIX acabaron tanto a los Orma y a su ganado, que la repoblación, incluso de un territorio muy reducido, llevó mucho tiempo. Por tanto, la presión sobre los bienes comunales ni siquiera fue un problema en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en la década de los sesenta, los orma empezaron a enfrentar problemas de presión ambiental. Estos problemas se manifestaron en la forma de invasiones extranjeras de otras etnias, así como en desacuerdos internos sobre los cambios en los derechos de propiedad a causa del crecimiento económico.

Invasiones extranjeras en el territorio orma

La nacionalización del gobierno ha aumentado la llegada de extranjeros al territorio orma. Parte de este aumento proviene de las actividades del mismo Gobierno nacional. Un abanico de proyectos de desarrollo requiere un uso intensivo de la tierra, y en Kenia, como en otros lugares, las tierras de pastoreo son una fuente natural de terreno para estos proyectos. Además, el Gobierno nacional prohíbe que los orma defiendan su territorio militarmente. El resultado es que los Orma son más susceptibles a la invasión, en particular de pastores somalíes.

Los orma han cedido grandes cantidades de territorio a proyectos de desarrollo, en especial esquemas de irrigación a lo largo del río Tana (incluyendo Hola, Bura y el Proyecto Arroz en el delta del Tana), reservas de

caza (incluyendo Tsavo, la Reserva de Primates del río Tana y la Reserva Kitui), ranchos comerciales no Orma (especialmente Galana) y ranchos cooperativos y grupales. Los Orma, en esencia, han quedado impotentes para detener cualquier intrusión en su territorio en nombre de la agricultura, la irrigación, los ranchos comerciales o las reservas de caza. Desde el punto de vista del Gobierno, estos usos de suelo son más productivos económicamente que el pastoreo y, por tanto, les ha concedido un estatus de prioridad nacional en esta y otras partes de Kenia. Incluso si los orma tuvieran representantes poderosos en Nairobi, es poco probable que lograran detener estas intrusiones.

Los Orma han tenido relativamente más éxito en llamar la atención del Gobierno en relación con la invasión de otros grupos pastoriles. En particular, se han aprovechado de la hostilidad entre Kenia y Somalia para promover la expulsión de los somalíes de su territorio. Por ejemplo, en 1980 hubo un influjo severo de bandidos saqueadores (comúnmente llamados shifta) que se creía eran de origen somalí.[17] Los orma usaron la situación para intentar expulsar de su territorio a todos los grupos étnicos externos: somalíes, wardei e incluso boran. Se vertieron acusaciones no verificadas de que todos estos grupos albergaban bandidos extranjeros en sus asentamientos. Después de unos ataques de bandidos en aldeas orma, los orma hicieron redadas de represalia en asentamientos somalíes, en un contexto en el que las redadas constituían el equivalente de una declaración de guerra étnica. Sin embargo, a la postre, los orma no podían competir militarmente con los somalíes. Por tanto, cuando los orma fueron inundados por grandes cantidades de somalíes degodia durante la sequía de 1980, no tuvieron más alternativa que acudir al Gobierno para pedir ayuda y ordenara a los extranjeros salir del territorio. El gobierno de Kenia sí tomó cartas en el asunto y permitió que el jefe de los orma, bajo la autoridad del "acta del jefe", ordenara que el ganado de los extranjeros fuera expulsado de su ubicación (la subunidad de un distrito) y rechazara cualquier otro permiso de ganado para atravesarlo.

17 Los bandidos no deben confundirse con el movimiento político con el mismo nombre de finales de la década de los sesenta.

Anteriormente, los orma también habían intentado expulsar a los somalíes dificultando su acceso al agua. Los orma se quejaron de que los somalíes y los wardei que habitaban en la parte norte del territorio orma en aquel momento se negaban a reconocer la tenencia orma de los pozos y se limitaban a usarlos (y destruirlos) a voluntad. Cuando fueron castigados por esas conductas, los somalíes respondieron que los orma no eran dueños de los pozos, ya que "sólo Dios puede ser dueño de un pozo". Quizá los somalíes hacían un esfuerzo algo forzado para apelar a una estructura institucional común, en este caso del islam, que comparten todas las etnias involucradas. Este estado de cosas acabó motivando el desmoronamiento de las instituciones primarias Orma para regular los pastos comunales: la acción militar y la tenencia de pozos. A estas alturas, a los orma no les quedaba más opción que recurrir a una autoridad más alta, ya que los wardei y los somalíes dejaron muy claro que no se regían por las instituciones orma.

El influjo de somalíes y wardei tuvo varias consecuencias para el sistema orma de derechos de propiedad. Más que nunca, los orma se dieron cuenta de la vulnerabilidad de su situación y empezaron a dar pasos para asegurar su propiedad. Lo lograron cultivando el sentimiento antisomalí en los oficiales nacionales kenianos. También dieron pasos para custodiar de forma más directa sus reclamos territoriales. Por ejemplo, en una zona nómada remota lejos de cualquier tienda, los aldeanos reportaron temor a migrar por miedo de que, si evacuaban la zona, llegarían los somalíes. Por ende, hubo gente que empezó a asentarse, en parte para asegurar sus derechos a la tierra. Esta crisis en particular se resolvió a la larga cuando llegaron las lluvias a finales de la década de los ochenta. Los somalíes salieron temporalmente del territorio galole, pero los orma cambiaron mucho a raíz de la experiencia. Además, los somalíes regresaron en números aún mayores durante la sequía de mediados de los ochenta.

Las amenazas externas a los derechos de propiedad de los Orma son potencialmente más costosas para los Orma que la amenaza interna. Por ello no debemos ignorar el efecto de la amenaza externa cuando consideramos las dinámicas de cambio interno que resultaron. Al evaluar los efectos relativos de las presiones internas y externas sobre los bienes

comunales, se debe tomar en cuenta que el desmantelamiento de los bienes comunales comenzó a inicios de la década de lo sesenta, mucho antes de la ola más reciente de la invasión somalí. Si bien el proceso de crecimiento económico y de asentamiento Orma, a la postre, hubiera precipitado por sí mismo un cambio en los derechos de propiedad, la crisis somalí, sin embargo, pudo haber ayudado a superar la resistencia ideológica al sistema resultante. Tomando esto en cuenta, ahora pasaremos a la situación interna, que podría arrojar más luz sobre los derechos de propiedad cambiantes en otros contextos.

Los orma galole empezaron a sedentarizarse en la región wayú a finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta. Para los años cincuenta, contaban con una pequeña tienda, una escuela, un dispensario, una mezquita, una oficina para el jefe y un camino al cuartel general del distrito. El proceso fue extremadamente gradual al principio y la zona era fértil por naturaleza, de manera que una población de bastante buen tamaño podía permanecer ahí durante las temporadas de lluvia y de sequía con pocas consecuencias perjudiciales para la ecología o para el bienestar del ganado. No fue necesaria ninguna alteración al sistema comunal de tenencia en este momento. Sin embargo, para la década de los sesenta, la población era tan grande que los Orma empezaron a sentir presión sobre los recursos locales.

En el caso de los orma galole, la sedentarización no es sinónimo de una transición a la producción agrícola. Si bien el jefe experimentó con la agricultura comercial a gran escala en la década de los sesenta, la agricultura a escala más amplia no se desarrolló hasta los años setenta. Incluso hoy en día es, en el mejor de los casos, una estrategia oportunista, ya que depende de las inundaciones fluviales, que produce cosechas razonables solo una de cada cuatro temporadas, o aproximadamente una vez cada dos años.

Asentarse es incompatible con el pastoralismo de África del Este porque la caída de la lluvia tiende a estar muy focalizada; los pastores deben ser lo más móviles posibles para perseguir las lluvias y los pastos, y para emparejar la densidad de población con la disponibilidad de recursos. Los hogares sedentarios adinerados resuelven este problema manteniendo solo

pequeñas manadas para leche en la aldea y contratando a pastores para llevar a la mayoría de su ganado a campamentos remotos y altamente móviles.

A los orma les atrajo el asentamiento por una variedad de razones. Para aquellos con intereses comerciales, el asentamiento facilitó en gran medida el acceso a la información, al transporte y a compradores y vendedores. Otros fueron atraídos por alguna combinación de la escuela, la mezquita, los dispensarios, las tiendas, la disponibilidad de tierra arable junto al río, la presencia de familiares adinerados, las oportunidades de empleo y la relativa facilidad de una vida sedentaria. No obstante sus motivos para asentarse, todos los hogares se vieron obligados a depender de alimentos comprados para una gran parte de su subsistencia, ya que el acceso a la leche (el alimento de primera necesidad) se redujo mucho con la sedentarización; en otras palabras, todos fueron forzados a adoptar una estrategia de producción altamente comercial (vendían ganado y compraban granos).

A medida que aumentó la presión sobre el ganado en todo el territorio, no había nada que detuviera a los nómadas de usar los abundantes pastizales en la región de los asentamientos, lo que produjo pastizales insuficientes para los rebaños de leche de los sedentarios durante la temporada de secas. A principios de los sesenta, los ancianos sedentarios, incluyendo el jefe residente del Gobierno, proclamaron que una pequeña zona alrededor del asentamiento permanente de los wayú quedaría inaccesible para el pastoreo de cualquier ganado en temporada de lluvias, con excepción del perteneciente a los aldeanos locales. Los Orma le llamaron a esa zona *laf sera,* algo así como 'tierra prohibida' (Behnke, 1985).

En las décadas de los sesenta y los setenta la zona restringida no alcanzaba el tamaño suficiente para representar una amenaza seria a los nómadas. El conflicto se evitaba con relativa facilidad, y las invasiones, aunque ocurrían en definitiva, no resultaban tan serias como para perjudicar la base de recursos de los hogares sedentarios. Sin embargo, a lo largo de los años los aldeanos sedentarios gradualmente extendieron las restricciones sobre esta zona de pastoreo al limitar el periodo conocido como "temporada seca" y aumentando el tamaño del territorio para incluir todas las tierras de pastoreo a un día de distancia caminando desde

el centro en cada dirección. Para 1985, la zona restringida era sustancial y se prohibía el acceso a personas externas durante todo el año. Como siempre, los nómadas contaban aún con la opción de asentarse en cualquier momento y así gozar de acceso al pastoreo restringido, pero conllevaba costos. Todos los colonos debían mandar al menos algunos de sus hijos a la escuela y contribuir al esfuerzo de recaudación *harambee* (autoayuda), el medio principal de pago de impuestos.

De forma significativa, para 1985, el nuevo sistema de derechos de propiedad era aplicado en gran medida por el Estado. Hasta principios de los ochenta, los pastores reportaban los invasores a los ancianos y las sanciones eran ejecutadas por las instituciones tradicionales orma, controladas por los ancianos. El jefe (un servidor público de Estado) nunca arrestaba a los pastores por invadir las zonas de pastoreo prohibidas. Para mediados de 1980, sin embargo, el jefe usaba su policía frecuentemente para arrestar a invasores tanto orma como somalíes. Por lo general, los infractores eran detenidos por breve tiempo y multados. Aunque la mayoría de los orma de los asentamientos, tanto ricos como pobres, apoyaron al jefe en esta política, los orma nómadas claramente no lo hicieron, y algunos hogares de los asentamientos fueron empáticos con la causa de los nómadas. Para entender el desmoronamiento de la capacidad de los ancianos para hacer cumplir el pastoreo restringido y, por tanto, la necesidad de recurrir a una imposición externa por parte del Estado, debemos analizar el aumento en la diferenciación que ocurrió entre los orma durante los setenta y los ochenta. Mucha de la diferenciación se puede vincular al crecimiento económico y los diversos intereses económicos que derivaron.

A lo largo de los años setenta y ochenta hubo cambios significativos en precios relativos, cambios que favorecieron la producción comercial del ganado y aumentaron el valor de las tierras alrededor de los asentamientos permanentes. Por ejemplo, entre 1980 y 1987, las ganancias de la producción de ganado en tierras Orma aumentó 116%, mientras que la inflación general fue de 93% (Ensminger, 1991; 1996). Ya que los hogares sedentarios cuentan con mejor acceso al transporte, a los mercados y a la información sobre precios, un aumento en la comercialización tiende a conducir a un aumento en la sedentarización. A medida que creció la

población sedentaria, también lo hizo el valor de la tierra, que a su vez promovió la exigencia de restricciones a la tierra alrededor de los asentamientos permanentes.

Cambios en los costos relativos de mantener campamentos alejados de ganado también propiciaron la demanda de tierra de los sedentarios. A medida que aumenta la demanda por la educación, disminuye la población de jóvenes disponibles para trabajar, lo que aumenta no solo el costo directo de la mano de obra, sino los costos de transacción (aquí costos de agencia) también. A medida que la mano de obra de los hijos es sustituida por la de pastores contratados en campamentos remotos de ganado, disminuye la calidad del pastoreo, lo que conduce a pérdidas significativas. Algunos dueños de rebaños se quejaron en particular de que esto representó un problema durante la sequía de 1984 y que explicaba mucha de la pérdida de 70% del ganado que se dio en ese momento. Estos problemas con los trabajadores son menos severos entre los pastores contratados que viven en las aldeas, donde el dueño del rebaño los vigila todos los días. Por tanto, en 1987, los sedentarios empezaron a intentar expandir las zonas restringidas alrededor de las aldeas con asentamientos para acomodar sus campamentos de ganado.

La alienación de la tierra Orma para la creación de esquemas de irrigación, reservas de caza y una variedad de ranchos también ha reducido de forma drástica el acceso de los orma a fuentes de agua durante la temporada seca, como es el río Tana. A medida que disminuye el acceso a fuentes de agua alternas, se incrementa el valor relativo de la tierra alrededor de las aldeas sedentarias que cuentan con sus propios suministros de agua. Al final, los servicios sociales y económicos disponibles en las aldeas sedentarias en su conjunto contribuyen a los beneficios relativos del asentamiento y, por tanto, al valor de la tierra en la zona.

Estos cambios en precios relativos han aumentado la brecha en los intereses económicos entre los sedentarios y los pastores nómadas, y quizá han persuadido a algunos sedentarios a superar sus reparos ideológicos sobre la restricción del acceso a los bienes comunales. A lo largo de los años, los colonos usaron dos formas de razonamiento ideológico para justificar los

derechos de propiedad más restrictivos. En un inicio, los orma apelaron a las costumbres que dan preferencia a las necesidades de los rebaños lecheros por encima de los *ureni*, o campamentos de ganado (cf. Hogg, 1990, para los boran). Es concebible que incluso los nómadas podrían haber aceptado esto, en especial dado que los costos para ellos al inicio eran bajos. Después, los sedentarios argumentaron que se habían sedentarizado para mandar a sus hijos a la escuela y que, por tanto, había que prohibirles a los pastores nómadas (quienes podían ir a otros lugares) usar los únicos recursos que estaban al alcance de los rebaños de los aldeanos. Esta explicación apeló a la "ideología" nacional, ya que la educación primaria obligatoria se estipulaba en la ley (si bien no se aplicaba con seriedad) a partir de finales de los años setenta. Los sedentarios, por tanto, sabían que al argumentar su caso podían contar con el respaldo del Gobierno nacional.

Para 1987, la situación había llegado tan lejos que ninguno de estos reclamos a la legitimidad ideológica era sostenible. En primer lugar, durante algunos años los niños de muchos hogares excluidos del pastoreo restrictivo ya habían estado asistiendo a la escuela. En segundo lugar, en 1987 algunos hogares comerciales adinerados ejercían presión política para extender la zona de pastoreo restringida para englobar una zona con tamaño suficiente para acomodar sus campamentos de ganado en la temporada seca. En parte, lo proponían como la estrategia más efectiva para contrarrestar la amenaza somalí a su territorio. Junto con iniciativas similares en otras aldeas a lo largo del río Galole, este movimiento amenazó con crear una zona restringida casi continua de este a oeste a través de toda la frontera Orma. Tal cambio pudo haber obligado a todos los nómadas galole a sedentarizarse. Aunque la propuesta seguía en la fase de negociación a finales de 1987, el hecho de que fuera seriamente considerada por un número sustancial de sedentarios es muy significativo, lo cual indica que, o bien las normas respecto a la distribución aceptable de los costos y beneficios a lo largo de la sociedad han cambiado de forma considerable a lo largo de los años, o los hogares sedentarios adinerados sienten confianza en que su voluntad puede prevalecer ante objeciones ideológicas significativas. Lo segundo es posible solo bajo condiciones de puesta en marcha por parte de terceros, como las que ahora prevalecen.

La creciente brecha entre los nómadas orientados a la subsistencia y los pastores comerciales sedentarios, tanto ricos como pobres, no es la única forma de diferenciación económica que ha atravesado la sociedad Orma. De haber sido la única, la implementación descentralizada autorizada por los ancianos sedentarios podría seguir funcionando. Sin embargo, en la comunidad sedentaria se dieron escisiones serias, algunas claramente económicas y otras no tanto. De lo más notable fue que un número de hogares sedentarios adinerados, muchos de los cuales se asentaron recién apenas como consecuencia de la sequía de 1984, contaban con familiares cercanos nómadas cuyos intereses apoyaban. Muchas familias practicaron una estrategia dividida, con parte del hogar sedentarizado y otra parte nómada y, por tanto, tenían intereses mixtos. Además, un número limitado de dueños de tiendas adinerados y dueños de tienditas de té pobres realizaban bastantes intercambios con los nómadas y los somalíes, y los apoyaban políticamente. Resulta claro que las líneas de conflicto en esta disputa no se basaban en intereses de clase tanto como en intereses económicos y en lealtades familiares.

Para la mayoría de los Orma, la amenaza externa al pastoreo que representaba la invasión somalí precipitó una crisis que pudo haber aumentado la capacidad de los sedentarios para superar la resistencia ideológica a los cambios en los derechos de propiedad. Aunque algunos cambios hubieran sido necesarios aun con la ausencia de la amenaza externa, quizá no hubieran llegado tan rápido ni tomado la forma que tomaron si las circunstancias históricas hubieran sido distintas.

La aplicación de la ley en manos del Estado ofreció la ventaja de sanciones más rigurosas (y por tanto mayor protección para la tierra cuyo valor aumentó), mientras obvió la necesidad de un apoyo político de base más amplia para los nuevos derechos de propiedad. En otras palabras, ahora es posible que un grupo más pequeño instaure cambios institucionales que los favorezcan. La composición de este grupo cambia a lo largo del tiempo, en parte como respuesta a cambios en precios relativos.

Conclusiones

La relación entre crecimiento económico y derechos de propiedad es complicada. El crecimiento cambia los costos y beneficios de los sistemas de derechos de propiedad y la distribución de esos costos y beneficios. Sin embargo, los derechos de propiedad no siempre se reestructuran solo en respuesta a consideraciones puramente económicas; la viabilidad a la larga y la deseabilidad de ciertos derechos de propiedad también reflejan la ideología y la política. La ideología, que incluye nociones de justicia e imparcialidad, influye en la evaluación de los sistemas de derechos. Además, las percepciones de imparcialidad afectan a la disposición de las personas para cumplir con cualquier sistema particular y, por tanto, afectan los costos de transacción de ese sistema. Los derechos de propiedad que se terminan eligiendo dependen de cómo se eligen los derechos, así como de qué derechos son deseados. Las personas eligen muchos, si no es que la mayoría, de los derechos de propiedad importantes de manera colectiva, mediante una combinación de instituciones políticas formales e informales. El alcance que tienen los distintos grupos para afectar la elección de derechos de propiedad depende de las instituciones políticas que se usan para tomar las decisiones.

El caso de los Orma ilustra la interacción de economía, ideología y política en la evolución de los derechos de propiedad. No es coincidencia la temporalidad del paso de derechos de propiedad comunales a derecho de propiedad más privados entre los orma. El crecimiento económico creó una situación en la que los nuevos derechos de propiedad eran necesarios, deseados por algunas facciones y más provechosos de lo que habían sido antes. Desde los años sesenta, los orma, como muchos otros pastoralistas en África, han enfrentado un aumento en el sobrepastoreo. El sobrepastoreo podría reducirse alternando los derechos de propiedad. Sin embargo, los distintos grupos involucrados no llegaron a un acuerdo respecto a qué derechos adoptar.

El desacuerdo se generó en gran medida por el deseo de los productores comerciales de proteger sus ganancias. Y mientras los orma peleaban por derechos de propiedad, el Gobierno central de Kenia se acercaba cada

vez más. Aquellos con mayor contacto con el Gobierno estuvieron en una posición provechosa para usar las nuevas instituciones a su favor. Anteriormente, los costos de aplicación de un control más exclusivo de las tierras de pastoreo no se hubieran pagado con los ahorros económicos derivados de los nuevos derechos de propiedad. Sin embargo, una vez que los costos de aplicación pudieron trasladarse, al menos en parte, al Gobierno central, los nuevos derechos se volvieron atractivos económicamente para algunos grupos de interés. La presencia de una gran población de somalíes étnicos quizá no alteró de forma dramática el resultado final de la situación, pero podría haber forzado el asunto considerablemente, para que la resistencia ideológica que permanecía hacia una solución costosa para los nómadas fuera más fácil de superar. Por tanto, para 1985, la mayoría de los orma estuvieron de acuerdo en que era legítimo que el Estado empleara la fuerza contra sus propios integrantes: por lo regular, el jefe usaba su policía para arrestar a invasores de las zonas de pastoreo restringidas, invasores tanto Orma como somalíes, y la gran mayoría de los orma sedentarios (64% de la población) consideró apropiada esta política.

El caso de los orma debería ser didáctico para muchas otras partes del mundo en vías de desarrollo. El asunto de quién paga por la instauración de nuevos derechos es particularmente importante para entender los derechos de propiedad cambiantes en las economías en desarrollo. Las burocracias centrales de las naciones en desarrollo están teniendo un alcance más profundo en las áreas remotas. A medida que lo tienen, formas de derechos de propiedad que no se podían aplicar en la localidad podrían ser ahora aceptables desde una perspectiva económica porque la instauración de la ley está subsidiada por el Estado central, como es el caso de los Orma. Pero las cambiantes economías de implementación no dicen nada sobre el efecto en el desempeño económico de los nuevos derechos de propiedad, sobre su integridad ecológica ni sobre su equidad. En tales circunstancias, el crecimiento económico bien podría crear ciertos beneficios no solo económicos, sino también políticos, en forma de acceso privilegiado al Estado central. En este caso, aquellos con mejor acceso podrán manipular mejor las agencias de instauración de la ley para sus propios fines y crear así nuevos derechos de propiedad favorables para ellos.

Reconocimientos

Nos gustaría agradecer a Lee Alston, Yoram Barzel, Victor Goldberg, Robert Higgs, Gary Miller, Rodney Smith, Michael Taylor y varios revisores anónimos por su amabilidad de leer y comentar versiones preliminares de este artículo. El artículo también fue mejorado por los comentarios que recibimos en la conferencia "Derechos cambiantes en la propiedad y problemas del desarrollo pastoral" que tuvo lugar en Manchester, Inglaterra, y en presentaciones de seminario de la Universidad de Arizona y la Universidad de Chicago. Jean Ensminger también desea agradecer a las siguientes instituciones por su generoso apoyo a la investigación durante los dos periodos de trabajo de campo en los que se basa este artículo (julio de 1978 a febrero de 1981 y abril de 1987 a diciembre de 1987): Fulbright-Hays, Ford Foundation, National Science Foundation (BNS-7904273), Rockefeller Foundation y National Institutes of Health (SSP 5 R01 HD213427 DBS). Por último, los National Museums of Kenya y el Instituto de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Nairobi brindaron apoyo institucional durante las dos estancias en campo, que es muy valorado.

Referencias[18]

Axelrod, R. 1984. *The evolution of cooperation*. Basic.

Bailey, F. G. 1965. Decisions by consensus in councils and committees with special reference to village and local government in India. En M. Gluckman y F. Eggan (coords.). *Political systems and the distribution of power* (1-20). Frederick A. Praeger.

Banco Mundial. 1989. *World development report 1989*. Oxford University Press.

18 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Barzel, Y. 1989. *The economic analysis of property rights*. Cambridge University Press.

Bates, R. 1981. *Markets and states in tropical Africa*. University of California Press.

Bates, R. 1983. *Essays on the political economy of rural Africa*. Cambridge University Press.

Bates, R. 1989. *Beyond the miracle of the market: the political economy of agricultural development in Kenya*. Cambridge University Press.

Behnke, R. 1985. *Open-range management and property rights in pastoral Africa: a case of spontaneous range enclosure in South Darfur, Sudan*. Reporte núm. 20f. Pastoral Development Network, Overseas Development Institute.

Binger, B. y E. Hoffman. 1989. Institutional persistence and change: the question of efficiency. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, *145*, 67-84.

Cheung, S. N. S. 1973. The fable of the bees: an economic investigation. *Journal of Law and Economics*, *16*, 11-34.

Demsetz, H. 1967. Toward a theory of property rights. *American Economic Review*, *57*, 347-359.

Dennen, R. T. 1976. Cattlemen's associations and property rights in land in the American West. *Explorations in Economic History*, *13*, 423-436.

Eggertsson, T. 1990. *Economic behavior and institutions*. Cambridge University Press.

Ellickson, R. 1986. Of course and cattle: dispute resolution among neighbors in Shasta County. *Stanford Law Review*, *38*, 623-687.

Elster, J. 1985. *Making sense of Marx*. Cambridge University Press.

Ensminger, J. 1990. Co-opting the elders: the political economy of state incorporation in Africa. *American Anthropologist*, *92*, 662-675.

Ensminger, J. 1991. Structural transformation and its consequences for Orma women pastoralists. En C. Gladwin (coord.). *Structural adjustment and African women farmers* (281-300). University of Florida Press.

Ensminger, Jean. (1996). *Making a market: the institutional transformation of an African society*. Cambridge University Press.

Evans, P., D. Rueschemeyer y T. Skocpol (eds.). 1985. *Bringing the state back in*. Cambridge University Press.

Furubotn, E. G. y R. Richter (eds.). 1989. Symposium issue. *Journal of Institutional and Theoretical*, s.d.

Gilligan, T., W. Marshall y B. Weingast. 1989. Regulation and the theory of legislative choice: the Interstate Commerce Act of 1887. *Journal of Law and Economics*, *32*, 35-61.

Goldberg, Victor P. 1981. "Bridges Over Contested Terrain: Exploring the Radical Account of the Employment Relationship." En *Management Under Differing Value Systems*, editado por Günter Dlugos, Klaus Weiermair y Wolfgang Dorow, 375–403. Berlin y Nueva York: Walter de Gruyter & Co.

Goldberg, V. 1989. Readings in the Economics of contract law. New York: Cambridge University Press.

Gulliver, P. H. 1972. *Family herds*. Routledge and Kegan.

Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science*, *162*, 1243-1248.

Hardin, G. y J. Baden (eds.). 1977. *Managing the commons*. W. H.

Hechter, M. 1987. *Principles of group solidarity*. University of California

Helland, J. 1980. *Five essays on the study of pastoralists and the development of pastoralism*. Ensayo ocasional núm. 20. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet I Bergen.

Higgs, R. 1987. *Crisis and Leviathan*. Oxford University Press.

Higgs, R. 1989. Organization, ideology and the free rider problem: comment. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, *145*, 232-237.

Hinich, M. y M. Munger. (1992). A spatial theory of ideology. *Journal of Theoretical Politics*, *4*(1), 5-30.

Hinich, M. y M. Munger. (1994). *Ideology and a general theory of politics*. University of Michigan Press.

Hitchcock, R. 1985. Water, land and livestock: the evolution of tenure and administration patterns in the grazing areas of Botswana. En L. Picard (coord.). *The evolution of modern Botswana* (84-121). Rex Collins.

Hogg, R. 1990. The politics of changing property rights among Isiolo Boran pastoralists in Northern Kenya. En P. T. W. Baxter y R. Hogg (coords.). *Property, poverty and people: changing rights in property and problems of pastoral development* (20-31). Department of Social Anthropology, University of Manchester.

Johnson, R. y G. Libecap. 1982. Contracting problems and regulation: the case of the fishery. *American Economic Review*, *72*, 1005-1022.

Kahneman, D., J. Knetsch y R. Thaler. 1986. Perceptions of unfairness: constraints on wealth seeking. *American Economic Review*, *76*, 728-741.

Lewis, I. M. 1961. *A pastoral democracy*. Oxford University Press.

Levi, M. 1988. *Of rule and revenue*. University of California Press.

Libecap, G. 1989. *Contracting for property rights*. Cambridge University Press.

Lipton, M. 1977. *Why poor people stay poor: a study of urban bias in world development*. Maurice Temple Smith.

Lobo, J. 1984. *The itinerary of Jeronimo Lobo*. (M. G. da Costa, Ed.; M. Lockhart, Trad.). The Hakluyt Society.

McCay, B. y J. Acheson. 1987. *The question of the commons: the culture and ecology of communal resources*. University of Arizona Press.

Netting, R. 1982. Territory, property, and tenure. En R. M. Adams, N. J. Smelser y D. J. Treiman (eds.). *Behavioral and social science research: a national resource* (pp. 446-501). National Academy Press.

New, C. 1873. *Life, wanderings, and labours in Eastern Africa*. Hodder and Stoughton.

North, D. C. 1977. Markets and other allocation systems in history: the challenge of Karl Polanyi. *Journal of European Economic History*, *6*, 703-716.

North, D. C. 1981. *Structure and change in economic history*. W. W. Norton.

North, D. C. 1986. Is it worth making sense of Marx?. *Inquiry*, *29*, 57-63.

North, D. C. 1990. *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

North, D. y R. P. Thomas. 1973. *The rise of the Western World: a new economic history*. Cambridge University Press.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Peters, P. 1984. Struggles over water, struggles over meaning: cattle, water and the state in Botswana. *Africa*, *54*, 29-49.

Peters, P. 1987. Embedded systems and rooted models: the grazing land of Botswana and the "commons" debate. En B. McCay y J. Acheson (eds.). *The question of the commons: the culture and ecology of communal resources* (171-194). University of Arizona Press.

Przeworski, A. 1985. Marxism and rational choice. *Politics and Society*, *14*(4), 379-409.

Riker, W. 1980. Implications from the disequilibrium of majority rule for the study of institutions. *American Political Science Review*, *74*, 432-446.

Riker, W. 1986. *The art of political manipulation*. Yale University Press.

Roemer, J. 1982. *A general theory of exploitation and class*. Harvard University Press.

Schofield, N. 1986. Anarchy, altruism and cooperation. *Social Choice and Welfare*, *2*, 207-219.

Siegenthaler, H. 1989. Organization, ideology and the free rider problem. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, *145*, 215-231.

Skocpol, T. 1985. Bringing the state back in: strategies of analysis in current research. En P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (eds.). *Bringing the state back in* (3-37). Cambridge University Press.

Taylor, M. 1982. *Community, anarchy and liberty*. Cambridge University Press.

Taylor, M. 1987. *The possibility of cooperation*. Cambridge University Press.

Williamson, O. *1985 The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting*. Free Press.

14. El estado y sus márgenes: etnografías comparadas*[1]

Veena Das y Deborah Poole

Este libro es sobre los márgenes, los lugares desde donde buscamos comprender lo que se conoce como el estudio del Estado en la antropología. Los capítulos aquí reunidos iniciaron como parte de un seminario avanzado en la School of American Research. En él, solicitamos a antropólogos que trabajaban en diferentes regiones que reflexionaran sobre lo que podría constituir la etnografía del Estado en las prácticas, lugares y lenguas consideradas al margen del Estado nación. Aunque invitamos a antropólogos cuyo trabajo se centraba en regiones dramáticamente afectadas por las recientes reformas políticas y económicas, queríamos distanciarnos de la idea de que estas reformas habían de algún modo debilitado o reducido las formas de regulación y pertenencia que supuestamente constituyen el Estado nación moderno. Nuestra estrategia analítica y descriptiva consistió en alejarnos de la imagen arraigada del Estado como una forma de administración racional de la organización política que se debilita o se desarticula en sus márgenes territoriales o sociales. Al contrario, solicitamos a los participantes del seminario que reflexionaran sobre cómo las prácticas y la política de vida en estas zonas configuran las prácticas políticas, normativas y disciplinarias que constituyen, de alguna manera, eso que llamamos "el Estado".

Como una disciplina a menudo considerada marginal en la teoría política occidental, la antropología ofrece un punto de partida ideal para el replanteamiento radical del Estado que requiere una visión desde los márgenes. La antropología suele configurarse como una disciplina que

---

1 Publicado originalmente en: Veena Das y Deborah Poole, 2004, "State and Its Margins: Comparative Ethnographies", *Anthropology in the Margins of the State*, editado por Veena Das y Deborah Poole: 3–34. Santa Fe, NM, SAR Press.

*N de T. Ese manuscrito corresponde al capítulo introductorio del libro señalado en la referencia.

habla en nombre de (o a veces con) las poblaciones marginadas por las limitaciones políticas y económicas de dominio colonial y poscolonial. Además, la etnografía es una forma de conocimiento que privilegia la experiencia, adentrándose con frecuencia en ámbitos de lo social que no son fáciles de distinguir con los protocolos más formales utilizados por muchas otras disciplinas. Así, la etnografía ofrece una perspectiva única sobre el tipo de prácticas que parecen diluir el Estado en sus márgenes territoriales y conceptuales. Las perspectivas regionales o locales de la antropología también son importantes aquí, aunque por motivos algo diferentes a los que suelen referirse los antropólogos cuando hablan de comparaciones regionales. Todos los antropólogos en este volumen trabajan en Estados y regiones que la teoría política comparada suele caracterizar como "nuevas naciones" con Estados "fallidos", "débiles" o "parciales", y sus estudios se refieren de diferentes maneras a las modalidades particulares de gobierno en África, América Latina y el sur de Asia.[2] Sin embargo, no enmarcan sus etnografías sobre las prácticas disciplinarias, reguladoras y de cumplimiento de la ley como estudios sobre Estados regionales o fallidos, sino como invitaciones a repensar los límites entre el centro y la periferia, lo público y lo privado, lo legal e ilegal, que atraviesan también el corazón, hasta del Estado liberal europeo más "exitoso". Una antropología de los márgenes ofrece una perspectiva única para la comprensión del Estado no porque capture prácticas exóticas, sino porque sugiere que los márgenes son una consecuencia necesaria del Estado, al igual que la excepción es un componente necesario de la regla.

Por razones relativas a su origen histórico como el estudio de los pueblos "primitivos", la antropología no ha reconocido tradicionalmente al Estado como un objeto propio de la inspección etnográfica. Con algunas excepciones, hasta hace poco se asumía que el objeto de la antropología

2 La bibliografía sobre la tesis del Estado fallido es extensa. Para revisiones críticas de esta tesis, véanse, por ejemplo, Bose y Jalal (1997), Dunn (1995), Kohli (1990), Mbembe (2000; 2001) y Pantham (2003). Al comentar el estado de la teoría en relación con la tesis del Estado fallido en África, Célestine Monga dice lo siguiente: "En los últimos años, el continente se ha convertido en El Dorado del pensamiento salvaje, el mejor lugar para atrevidos safaris intelectuales, el espacio no regulado en el que practicar el incesto teórico, violar los fundamentos de la lógica, transgredir las prohibiciones disciplinarias; en resumen, entregarse al libertinaje intelectual" (Monga, 1996: 39).

eran las sociedades primitivas o sin Estado ("non-state"). Visto desde esta perspectiva, el Estado parecía lejano a las prácticas y métodos etnográficos que constituían los temas propios de la antropología.

Sin embargo, al mismo tiempo, el lenguaje y la figura del Estado han perseguido a la antropología. Tanto si optamos por situar los orígenes de la antropología política con Montesquieu ([1748] 1977), Maine ([1866] 2002) o Evans-Pritchard (1940), la búsqueda del orden o la lógica de los grupos primitivos utiliza un lenguaje sobre el orden heredado del Estado moderno europeo.[3] En este sentido, la antropología siempre ha tratado, de muchas formas no reconocidas, "sobre" el Estado, incluso (y quizá en especial) cuando sus sujetos se consideraban excluidos u opuestos a las formas de racionalidad administrativa, orden político y autoridad asignadas al Estado. Sostenemos que es por medio del lenguaje del Estado que los antropólogos han constituido tradicionalmente los temas sobre el orden social, la racionalidad, la autoridad e incluso la externalidad que definen su sujeto. Pierre Clastres (1974), por ejemplo, afirmaba hace unos treinta años que la racionalidad y las formas de vida propias de nuestros sujetos etnográficos no modernos se entendían mejor como expresiones de un deseo colectivo de resistir la inminente aparición del Estado. Aquí, como en muchos otros textos antropológicos, se asumía que el Estado era una presencia inevitable o fantasmal que moldeaba el significado y la forma que el poder adoptaba en cualquier sociedad. La labor del antropólogo, por tanto, se traducía en delimitar lo primitivo del dominio de las prácticas impuestas. En este tipo de ejercicio antropológico, al igual que en los primeros escritos marxistas y poscoloniales, lo primitivo se constituyó como un espacio nostálgico para el descubrimiento del Estado como un artefacto cultural universal, al que, incluso cuando estaba ausente, se le

3 Algunos comentaristas recientes han señalado que la antropología ha descuidado tradicionalmente el estudio del Estado, pero no han reparado cómo se definieron los problemas de la antropología política en el marco del Estado (véase, por ejemplo, Fuller y Harris, 2000).

veía como esperando en el umbral de la realidad, por decirlo de alguna manera.[4]

Cualquier esfuerzo por repensar el Estado como objeto de investigación etnográfica debe comenzar por considerar cómo se ha utilizado este doble efecto de orden y trascendencia para rastrear la presencia del Estado. Por un lado, los Estados parecen estar totalmente relacionados con el orden. Así, al cartografiar los efectos y la presencia del "Estado" en la vida local, los antropólogos suelen buscar indicios de racionalidades administrativas y jerárquicas que establezcan vínculos en apariencia ordenados con el aparato político y regulador de un Estado burocrático central. Este enfoque inspira gran parte del reciente giro hacia el Estado en los trabajos antropológicos (por ejemplo, Ferguson y Gupta, 2002; Fuller y Harris, 2000; Herzfeld, 2001: 124-25; Hansen y Stepputat, 2001). Desde este punto de vista, la tarea del antropólogo consiste, en primer lugar, en observar las instancias del Estado tal como son en el ámbito local y luego analizar esas manifestaciones locales de la burocracia y el derecho como interpretaciones culturalmente fundadas en las prácticas y convenciones que constituyen el Estado liberal moderno. Estas visiones limitadas del Estado conducen, a su vez, a una imagen conceptual y más dispersa en lo espacial

4 Esta cualidad inminente o espectral del Estado fue quizá articulada con mayor claridad por Clastres (1974). Su genealogía, sin embargo, puede rastrearse mediante los enfoques evolucionistas y desarrollistas de la antropología, donde teóricos de la fundación como Morgan (1877), Maine ([1866] 2002) y Engels ([1884] 1972) sostuvieron que la aparición del Estado era un momento decisivo en la progresión de las culturas hacia una condición de civilización marcada por la escritura, la propiedad privada y la aparición del Estado. Los teóricos posteriores de la "evolución política" ampliaron este concepto de progresión histórica para plantear el Estado como un punto final en el desarrollo de "sociedades complejas" definidas como tales basándose en consideraciones de estratificación social, producción y división del trabajo (véanse, por ejemplo, Banton, 1966; Fried, 1967). En estos planteamientos, al igual que en los modelos evolucionistas anteriores, el Estado era visto a un tiempo como inmanente a la lógica de la evolución social y como condición límite para la constitución del sujeto antropológico. Asimismo, el énfasis en los modelos económicos de evolución social (por ejemplo, Wolf, 1982) hizo que el Estado *per se* no se considerara a menudo como un subtema de la teoría antropológica. Trabajos teóricos más recientes se han basado de nuevo en construcciones de lo primitivo extraídas de Clastres (Deleuze y Guattari, [1972] 1983: 145-85) y Bataille (Taussig, 1997) para explorar la movilidad y el carácter inmanente del Estado como "formación básica [que está] en el horizonte a lo largo de la historia". En estas teorías, el Estado espectral se concibe no como el punto final de un proceso evolutivo, como en las antropologías anteriores, sino más bien como un "Urstaat primordial" transhistórico, el modelo eterno de todo lo que el Estado quiere ser y desea (Deleuze y Guattari, 1987: 217).

de lo que es el Estado, aun cuando siga siendo una en la que se puede seguir siendo en esencia identificable por medio de las afiliaciones del Estado con determinadas figuras institucionales.[5]

Uno de los aspectos de pensar el Estado en términos del establecimiento del orden es que los márgenes espaciales y sociales que con frecuencia constituyen el terreno del trabajo de campo etnográfico se consideran lugares de desorden donde el Estado ha sido incapaz de imponer su mandato.[6] Si bien es cierto que la antropología política reivindicó su singular capacidad para comprender lo político precisamente preguntándose cómo se mantenía el orden en las llamadas sociedades sin Estado, como los nuer (Evans-Pritchard, 1940), lo hizo relegando cualquier referencia al funcionamiento del Estado real —el colonial— en ese mismo contexto. Como han señalado muchos críticos de Evans-Pritchard, el sistema segmentado como un sistema de fuerzas balanceadas podía considerarse como la encarnación del orden político en la vida nuer, precisamente debido a que los desórdenes provocados por el Estado colonial no eran previstos (véase Coriat, 1993; Hutchinson, 1996). Aunque la atención a los contextos coloniales llevó a una mayor preocupación por el Estado como un factor en la conformación de ciertos tipos de sujetos antropológicos (Balandier, 1951; Gluckman, 1963; Meillassoux, [1975] 1981), tanto los antropólogos políticos (por ejemplo, Gledhill, 1994; Vincent, 1990) como los teóricos poscoloniales y de la subalternidad (véanse los diversos volúmenes sobre

5 Sobre la especificidad regional o cultural de las prácticas y efectos del Estado moderno, véanse, entre otros, Abélé (1990); Chatterjee (1997); Coronil (1997); Das (1995); Heyman (1999); Humphrey (2003); Lomnitz (2000); Maurer (1997); Messick (1993); Mitchell (1988); Ong (1999b); Pantham (2003); Sanders y West (2002); Smith (1999: 195-227); Hansen y Stepputat (2001). Sobre los enfoques antropológicos del Estado como paisaje institucional "translocal" o descentrado, véanse Gupta (1995), Ong (1999a) y Trouillot (2001). Para una perspectiva comparativa del terror de Estado, véase Sluka (2000).

6 Sobre el desorden y la marginalidad en antropología, véase especialmente Tsing (1993). La idea de un margen desordenado no es propia de las teorías occidentales del Estado. Por ejemplo, en *Muqadammah*, un texto árabe del siglo XIV, Ibn Jaldûn sostenía que los beduinos practicaban una forma de islam debilitado en comparación con los musulmanes urbanos porque su carácter nómada los alejaba de las autoridades reguladoras (Rosenthal, 1969). En las prácticas administrativas de los gobernantes coloniales existía una marcada sospecha hacia los nómadas, que continúa en las políticas poscoloniales. (Para una revisión de estas prácticas, véase Rao y Casimir, 2002).

estudios subalternos del Subaltern Collective) han tendido, hasta hace poco, a subrayar tanto la resistencia al Estado como las formas locales de pluralidad jurídica, económica y cultural que señalaban a los sujetos antropológicos como contenidos o articulados por el Estado.

Dado que es imposible pensar que los sistemas políticos del mundo contemporáneo contienen algún tipo de sociedad sin Estado, ¿estamos observando formas incompletas —o frustradas— del Estado en tales situaciones? ¿O las expresiones de incomprensión, pertenencia parcial y desorden que parecen habitar en los márgenes del Estado constituyen su condición necesaria como objeto teórico y político?

La clave de este aspecto de la problemática de los márgenes es la relación entre la violencia y las funciones ordenadoras del Estado. Influida por una imagen particular de la naturaleza humana, la teología política europea, ha otorgado al Estado tanto la cualidad de la trascendencia como el monopolio de la violencia (Abrams, 1988).[7] En este sentido, cabe recordar la famosa afirmación de Max Weber sobre los criterios para caracterizar a una organización política como Estado. En sus palabras, "una organización política permanente y obligatoria *(politischer Anstalt Anstaltsbetrieh)* se denominará Estado en la medida que su personal administrativo pueda reivindicar con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física para imponer su orden" (Weber, 1978: 54; subrayado del original). Weber también destacó que el uso de la fuerza en cualquier otro tipo de organización solo se consideraría legítimo si estuviera permitido por el Estado o prescrito por él. Así, "la pretensión del Estado moderno de monopolizar el uso de la fuerza es tan esencial para este como su carácter de jurisdicción obligatoria y funcionamiento continuo" (1978: 56). Al definir el Estado como aquel que sustituye la venganza privada por el imperio de la ley, Weber se

7 Aunque se consideraba que el Estado tenía el monopolio de la violencia legítima, mantenía una relación problemática con otros tipos de violencia, en especial la violencia sacrificial. Por ejemplo, Dumézil (1956) mostró la estrecha relación entre la lógica del sacrificio y la del castigo en su examen de la mitología indoeuropea. En antropología, Taussig ha discutido el carácter fetichista del Estado en relación con su cualidad de aprovechar el poder de los muertos en el "intercambio entre lo absurdo y lo oficial" (Taussig, 1997: 119). Este monopolio de la violencia contribuye a la noción del carácter trascendente del Estado en el discurso político/teórico del liberalismo.

basaba, por supuesto, en tradiciones anteriores de Kant y Hegel, para quienes el Estado en la modernidad se caracterizaba por fronteras bien definidas entre el ámbito externo de la ley y el ámbito interno de la ética, y también entre el ámbito de la razón universalista propia del Estado y las relaciones primordiales propias de la familia (por ejemplo, Hegel, [1821] 1991; Kant, [1797] 1965). Inherente a este imaginario de la figura del derecho estaba la creación de fronteras entre aquellas prácticas y espacios que se consideraban parte del Estado y aquellos que quedaban excluidos de él. La legitimidad, a su vez, surgió en función de esta acción de establecer fronteras de las prácticas del Estado. La violencia de la guerra ejercida entre Estados y el control policial de la violencia difusa de la sociedad mediante la fuerza se constituían como legítimos, pues pertenecían al Estado. Otras formas de violencia que parecían imitar la violencia estatal o desafiar su control eran consideradas ilegítimas.

En esta visión de la vida política, el Estado se observa siempre como un proyecto incompleto al que hay que imaginar y referirse constantemente invocando la desolación, la anarquía y el salvajismo que no solo se encuentran fuera de su jurisdicción, sino que lo amenazan también desde dentro. Kant, por ejemplo, asumía que los objetivos del gobierno en cuanto a la gestión del bienestar eterno, el bienestar ciudadano y el bienestar físico de las personas no son los mismos. El bienestar físico de las personas estaba amenazado desde dentro porque era "natural" que las personas antepusieran su bienestar físico frente a su bienestar ciudadano y su bienestar ciudadano frente a su bienestar eterno. Para Kant, este "estado de naturaleza" que amenaza el orden ciudadano debía transformarse mediante la educación (Vries, 2002). Weber, con quien la teoría de la racionalización del Estado está asociada de forma más estrecha, también trató este proceso como penosamente incompleto, pues el formalismo de la ley tenía que enfrentarse a las demandas de la justicia popular.[8] Quere-

8 "El desarrollo social moderno, aparte de los motivos políticos y profesionales internos ya mencionados, ha dado lugar a algunos otros factores por los que se está debilitando el racionalismo jurídico formal. La justicia kadi irracional se ejerce hoy en las causas penales clara y ampliamente con base en la justicia 'popular' del jurado. Apela al sentimiento del lego, que se siente molesto cada vez que se encuentra con el formalismo en casos concretos, y satisface las demandas emocionales de estas clases desfavorecidas que claman por una justicia sustantiva" (Weber, 1978: 892).

mos destacar que, para estos (y otros) teóricos fundacionales del Estado europeo, el propio Estado corría siempre el peligro de perder su control sobre la organización racional de la gobernanza debido a la fuerza de lo natural desde dentro. Así, las demandas de justicia popular se interpretaban como una expresión de facetas de la naturaleza humana que aún no habían sido dominadas por la racionalidad.

¿Y qué hay de la anarquía y la naturaleza salvaje que se consideran fuera del Estado? A este respecto, resulta importante el concepto de estado de naturaleza como el opuesto necesario y punto de origen del Estado y la ley. El hecho de que Hobbes ([1651] 1968), Locke ([1690] 1988), Rousseau ([1762] 1981) y otros teóricos tempranos del Estado pensaran el estado de naturaleza mediante la representación de América como un sitio donde se expresa el salvajismo *y* un lugar primordialmente idealizado, sugiere que también deberíamos pensar en los márgenes del Estado —el "estado de naturaleza"— como situados en el ámbito del lenguaje y la práctica, donde espacios o lugares reales que impulsan la idea de estado de naturaleza se encuentran con los orígenes míticos o filosóficos del estado. Situados siempre en los márgenes de lo que se considera como un territorio incuestionable de control (y legitimidad) estatal, los márgenes que exploramos en este libro son al mismo tiempo lugares donde la naturaleza puede imaginarse como salvaje y fuera de control, y donde el Estado está refundando de forma constante sus modos de funcionamiento y su marco jurídico. Estos lugares no son tan sólo geográficos: son también, y quizá de forma más importante, lugares de práctica donde la ley y otras prácticas del Estado son colonizadas por otras regulaciones que emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones para garantizar su supervivencia política y económica.

Es importante subrayar que en nuestro seminario de Santa Fe no partimos del supuesto de tener un entendimiento común sobre lo que son los márgenes. Aunque todos los autores querían pensar más allá de un simple modelo espacial de centro y periferia, las discusiones en Santa Fe revelaron que la relación entre las formas de poder soberano y disciplinario, así como las genealogías específicas de los sujetos políticos y económicos, influyen en nuestras diversas comprensiones sobre los márgenes. Nuestras

conversaciones nos llevaron a formular estas cuestiones en torno a tres conceptos de márgenes.

El primer acercamiento otorga primacía a la idea de márgenes en tanto periferias, vistos como contenedores naturales de personas consideradas poco integradas socialmente ante la ley. Como etnógrafos, estábamos interesados en comprender las tecnologías de poder específicas por medio de las cuales los Estados intentan "gestionar" o "pacificar" a estas poblaciones tanto mediante la fuerza como a través de una pedagogía de conversión aplicada para transformar a los "sujetos rebeldes" en sujetos de derecho del Estado. En varios casos analizados en este libro (Guatemala, Perú, Sudáfrica), las poblaciones marginales están conformadas por sujetos "indígenas" o "naturales", considerados al mismo tiempo como fundacionales de ciertas identidades nacionales y excluidos de estas mismas identidades por los conocimientos disciplinarios que los definen civil y racionalmente como "otros". En estos casos, las pretensiones jurídicas de inclusión se ven socavadas de formas interesantes por manifestaciones disciplinarias de poder que desestabilizan los mismos discursos de pertenencia que pretenden vincular a los sujetos con el Estado y sus leyes. En otros casos (Colombia, Chad, Sierra Leona, Sri Lanka), la pedagogía de la conversión se aplica en acciones menos reguladas entre sujetos que han sido desarraigados o desplazados por actos de guerra. En estos casos, los sujetos son jurídicamente constituidos como usuarios permanentes de las mismas formas de justicia no controlada o privada que subyacen al poder soberano en regímenes de guerra y excepción.

Un segundo enfoque relacionado con el concepto de margen que surgió de nuestras ponencias y debates en el seminario gira en torno a cuestiones de legibilidad e ilegibilidad. Al igual que otros antropólogos, aquí empezamos constatando el hecho bien conocido de que gran parte del Estado moderno se construye mediante sus prácticas de escritura. Reconocemos que las prácticas documentales y estadísticas del Estado pretenden, en cierto sentido, consolidar el control estatal sobre los sujetos, las poblaciones, los territorios y las vidas. Sin embargo, en los debates del seminario pronto advertimos que nuestras etnografías se oponían a la noción de que el Estado es de alguna manera "sobre" su legibilidad. Al contrario, nuestros trabajos

parecían apuntar a los diversos espacios, formas y distintas prácticas por medio de las cuales el Estado es experimentado y continuamente desmontado mediante la *ilegibilidad* de sus propias prácticas, documentos y palabras. Entre las distintas prácticas que consideramos están las economías de desplazamiento, falsificación e interpretación en torno al uso y la circulación de documentos de identificación personal. Aquí también destaca el espacio lleno de tensión del puesto de control. Como sitio donde los supuestos sobre la seguridad de la identidad y los derechos puede verse repentina y, a veces, violentamente alterada, el puesto de control nos llevó a pensar también en las distintas dinámicas temporales involucradas en las interacciones de las personas con el Estado y con los documentos oficiales.

Un tercer enfoque se centra en el margen como espacio entre los cuerpos, la ley y la disciplina. Al final, el poder soberano ejercido por el Estado no solo tiene que ver con los territorios, sino también con los cuerpos. De hecho, puede afirmarse que la producción de un cuerpo biopolítico es la actividad primaria del poder soberano. Muchos antropólogos han utilizado la noción de biopoder para rastrear cómo el poder extiende sus tentáculos sobre las ramificaciones de lo social. El lugar privilegiado en este proceso lo ocupa el creciente poder de la medicina para definir lo "normal". Sin embargo, el problema más general es cómo la política se convierte en el ámbito donde se cuestiona la "vida". En este sentido, los márgenes ofrecen un sitio adecuado especialmente interesante para observar la colonización del derecho por las disciplinas, así como la producción de categorías patológicas por medio de tácticas que parasitan la legislación incluso cuando derivan de estas estrategias de acción. Los debates en nuestro seminario sobre estas cuestiones orientaron la noción del Estado biopolítico hacia direcciones inesperadas por completo, pues se analizaron estrategias ciudadanas, imaginarios tecnológicos y nuevas dimensiones del lenguaje como coconstitutivas del Estado y los márgenes.

Estos tres enfoques sugieren modos distintos de ocupar los márgenes que aquellos que proviene de una simple narrativa de exclusión. En lo que resta de la introducción, analizaremos cómo los autores de este libro delinean estas diferentes comprensiones de margen en su trabajo etnográfico y cómo, al hacerlo, se inspiran y rearticulan el pensamiento sobre el Estado,

la soberanía y la biopolítica en la teoría política reciente. Los capítulos no están organizados en torno a cada uno de los conceptos de margen. Las tres nociones se encuentran presentes, pero tienen distinto peso en cada capítulo. En los siguientes apartados, nos preguntamos cómo opera la lógica de la excepción en relación con los márgenes, cómo se reivindica la ciudadanía económica y política, y cómo entendemos el funcionamiento del Estado biopolítico según la perspectiva de regiones cuya experiencia no suele considerar este conjunto de argumentos conceptuales.

Ley, márgenes y excepción

El trabajo antropológico reciente ha contribuido en gran medida a esclarecer los contextos en los que la guerra y otras formas de violencia colectiva se experimentan como estados de crisis o estados de excepción. Así, los antropólogos han reflexionado sobre cómo situaciones de guerra civil, violencia política general, regímenes autoritarios y gobiernos de emergencia configuran el sentido de la comunidad, el yo y el futuro político de las personas (por ejemplo, Das *et al*., 2000; 2001; Feldman, 1991; Ferme, 2001). Aquí también está en cuestión un amplio debate sobre cómo la violencia y la guerra configuran las propias condiciones en las que puede desarrollarse la etnografía (por ejemplo, Nordstrom, 1995). En esta literatura, la excepción tiende a ser tratada como una condición limitada o un recurso poder de emergencia, siendo reconocida como un aspecto cada vez más frecuente, aunque en cierta forma aberrante, de los Estados modernos donde trabajan los etnógrafos.

Aunque nuestro propio trabajo se ha beneficiado de múltiples maneras de este tipo de debates, nuestro concepto de margen va mucho más allá de la comprensión de "excepción" como un evento que puede limitarse a ciertos espacios o periodos, o a una condición que se opone, de algún modo, a las formas "normales" del poder del Estado. Más bien, partimos de la perspectiva de excepción muy distinta articulada por Walter Benjamin, Carl Schmitt y, más recientemente, Giorgio Agamben, cuyo trabajo ha sido abordado por antropólogos interesados en cuestiones de soberanía y biopoder.

En su replanteamiento del problema de la soberanía y la excepción, Agamben (1998) ha resucitado la figura del *Homo sacer*, una oscura figura del derecho romano arcaico, como encarnación de la "nuda vida", para considerar que la soberanía no se ejerce sobre territorios, sino sobre la vida y la muerte. Además, esta vida es "desnuda" porque puede ser arrebatada por cualquiera sin mediación de la ley y sin incurrir en homicidio. El *Homo sacer*, por tanto, es la persona a la que se puede *matar, pero no sacrificar.* Agamben cita las palabras de Pompeyo Festo: "El hombre sagrado es aquel que ha juzgado el pueblo a causa de un crimen. No está permitido sacrificar a este hombre, no obstante, quien lo mate no será condenado por homicidio" (1998: 71). La nuda vida, entonces, resulta ser algo constituido en cierto sentido "ante la ley". Puesto que el *Homo sacer*, como encarnación de la nuda vida, no puede ser sacrificado, queda fuera del ámbito de la ley divina, y puesto que quien lo mata no puede ser acusado de homicidio, también está fuera del ámbito de la ley humana.

No vamos a considerar aquí cuestiones sobre la precisión histórica; hay lugares donde el texto de Agamben está realmente desnudo. Los ejemplos se ofrecen de forma enigmática, pero no son bien elaborados. Por ejemplo, en los textos sobre soberanía del siglo XVII, el poder del padre sobre la vida y la muerte del hijo representaba las nociones legales de soberanía (Filmer, 1949), y Agamben llama acertadamente la atención sobre esta idea. Sin embargo, no discute si el ejercicio del poder soberano del padre es un ejemplo del poder sobre la nuda vida, o si por el contrario el hijo debe ser visto como un sujeto legalmente constituido. Del mismo modo, la discusión de Agamben sobre la ley de *habeas corpus* de 1679 plantea la cuestión de si la persona cuyo "cuerpo" se supone debe ser presentado ante el tribunal es un sujeto legalmente constituido o un cuerpo desnudo despojado de todas las marcas sociales y jurídicas (Fitzpatrick, 2001). Estas son todas son cuestiones complejas. Por lo pronto, lo que queremos tomar de la teoría de Agamben es la sugerencia de que la ley produce que ciertos cuerpos sean "matables" dado que la propia ley los ubica como anteriores a la instauración de la ley.

Para Agamben, la figura del *Homo sacer* es la clave para comprender la soberanía y los códigos políticos y jurídicos modernos gracias a lo que revela sobre el poder del soberano para recurrir a un estado de excepción

ilimitado. Aquí, Agamben se basa en la obra de Benjamin ([1978] 1986) y Schmitt ([1922] 1988) para argumentar que el estado de excepción ofrece una teoría de la soberanía que está tanto dentro como fuera de la ley. Dado que el soberano no puede, por definición, estar vinculado a la ley, la propia comunidad política se divide a lo largo de diferentes ejes de la pertenencia y la inclusión que pueden transitar a lo largo de las distinciones de raza, género y etnia, o que pueden producir nuevas categorías de personas que son incluidas en la comunidad política, pero que se les niega la pertenencia en términos políticos. La cuestión no es solo que la pertenencia sea negada, sino que los individuos son reconfigurados mediante leyes especiales como integrantes de poblaciones sobre las que pueden ejercerse nuevas formas de regulación. Aunque la división entre inclusión y pertenencia puede ser clara —por ejemplo, en la exclusión de ciertas razas o etnias de la ciudadanía— conviene recordar que los estados de excepción, cuyo ejemplo clásico es la guerra, puede redibujar las fronteras de tal modo que quienes tenían asegurada su ciudadanía pueden ser expulsados o reconfigurados como cuerpos diferentes. Para Agamben, el ejemplo paradigmático es el campo de concentración, donde primero se despojaba a los judíos de su ciudadanía para luego confinarlos al campo y someterlos a sus atrocidades. Otros ejemplos de tales excepciones desde "dentro" incluyen la reclusión de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, o la reciente legislación relativa a categorías tales como "terrorista".

Así, aunque Agamben presenta la figura del *Homo sacer*, al menos en algunos casos, como si habitara algún tipo de vida presocial, al parecer los cuerpos matables se producen, de hecho, *a través de* un complejo proceso legal que los convierte en nuda vida (Fitzpatrick, 2001). Esto podría explicar por qué pueden detectarse dos distintas modalidades de la norma en la concepción de Agamben sobre la nuda vida. En ciertos momentos, lo asigna a espacios específicos (el campo de concentración) y a figuras concretas de la vida moderna (los refugiados), como instancias donde la nuda vida se encarna y sobre las que actúan las formas modernas del Estado; en otros casos, parece ver la nuda vida como una amenaza sostenida y una situación en la que cualquier ciudadano podría caer. Esta última

interpretación de la nuda vida como excepción invita a prestar atención a una comprensión de los márgenes que empleamos aquí, como lugares que no se encuentran fuera del Estado, sino que, como los ríos, corren a través de su cuerpo.

No obstante, en cierto punto diferimos de Agamben, pues consideramos que los estados de excepción, las diferencias entre pertenencia e inclusión, o las figuras que residen tanto dentro como fuera de la ley, no aparecen como presencias espectrales del pasado, sino más bien como prácticas incrustadas en la vida cotidiana del presente. En este volumen, por tanto, proponemos que el concepto de excepción de Agamben enmarca en dos formas nuestras exploraciones etnográficas sobre los márgenes. En primer lugar, nuestra búsqueda de los márgenes con frecuencia se enfoca en aquellas prácticas que parecen relacionarse con la continua refundación del derecho mediante formas de violencia y autoridad que pueden ser interpretadas como extrajudiciales y ajenas, o anteriores, al Estado. Esta refundación se produce tanto por la producción de cuerpos matables, como plantea Agamben, como mediante las formas de poder encarnadas en figuras como el policía o el "jefe" local. Al igual que el *Homo sacer*, estas figuras gozan de cierta inmunidad ante la ley precisamente porque se establece que existen fuera o antes del derecho.

Para Kant, Hegel y otros teóricos liberales, el origen del derecho se remonta a las formas fundacionales y, en última instancia, privadas (o "naturales") del derecho que precedieron al Estado (véase Asad, 2003). En nuestras etnografías, el problema del origen de la ley no emerge como el mito del Estado, sino más bien como la figura de hombres cuya facultad para representar al Estado o para hacer cumplir sus leyes se basa en su reconocida capacidad para actuar con impunidad ante las apelaciones formales del derecho y las prácticas extrajudiciales que se interpretan claramente como ajenas, o anteriores, al Estado. Ejemplos de este tipo de figuras son el *gamonal* peruano, o el hombre fuerte local, que representa al Estado tanto mediante expresiones particulares de agresividad como en actos de violencia considerados ilegales (Poole); las fuerzas paramilitares colombianas que actúan al mismo tiempo como una extensión del ejército y como conductos para el flujo de armas hacia los capos de la droga o a

las plantaciones (Sanford); y los intermediarios que habitan las fronteras económicas descritas por Roitman. Estas figuras de autoridad local son manifestaciones muy personalizadas de poder privado *como de* la supuesta autoridad impersonal o neutral del Estado. Justo porque también actúan como representantes del Estado, son capaces de atravesar —y, por tanto, empañar— la división aparentemente clara que separa las formas legales y extralegales de castigo y aplicación de la ley. En muchos sentidos, estas figuras locales que construyen su carisma y poder por medio de expresiones locales de rudeza, agresividad y amenaza son similares a los "grandes hombres" descritos por Godelier y Strathern (1991). Al igual que los "grandes hombres", en realidad no encarnan la autoridad "tradicional", sino una mutación de la autoridad tradicional facilitada por el poder intermitente del Estado. Estas figuras, representadas con distintas apariencias en los diferentes contextos etnográficos de los capítulos que componen este volumen — intermediarios, traficantes, caciques, paramilitares— representan al mismo tiempo la dilución de la jurisdicción del Estado como su continua refundación mediante su apropiación (no tan mítica) en la justicia privada y la violencia. En este sentido, son el secreto público a través del cual las personas que encarnan la ley, la burocracia y la violencia, que en conjunto constituyen el Estado, van más allá del ámbito del mito para incorporarse a la realidad de la vida cotidiana.

Prestar atención a estas personas nos ayuda a entender cómo la frontera entre lo legal y lo ilegal corre justo dentro de las oficinas e instituciones que encarnan el Estado. Das, por ejemplo, ofrece el ejemplo de un policía, conocido por su feroz integridad, que se enfrenta a la actividad de una mafia poderosa y casi pierde la vida. A pesar de ser un funcionario del Estado, también está convencido de que el proceso judicial es incapaz de imputar el delito a los responsables, por lo que procede a violar el derecho procesal para impartir lo que considera justicia sustantiva. El mismo agente de policía, cuando participa en las operaciones de contrainsurgencia del Estado contra lo que se define como organizaciones militantes o terroristas, es asesinado por el propio agente en quien confiaba, porque cuando la policía penetra en organizaciones militantes o terroristas para combatirlas, las fronteras entre el terrorista y el policía se difuminan. Como en la descripción de Jeganathan, también en Das, las acciones

del Estado en las zonas de emergencia, o en estados de excepción, no pueden entenderse en términos de ley y transgresión, sino más bien como prácticas que se sitúan a un tiempo dentro y fuera de la ley. Como encarnación del estado de excepción, el policía no desafía esta o aquella ley, sino la posibilidad misma del derecho (Benjamin, [1978] 1986; Derrida, 1992; Taussig, 1997). Al abordar este dilema filosófico sobre el origen del Estado y del derecho como un problema etnográfico, los autores de este libro dejan en claro que este problema del origen del derecho no es un espectro del pasado, como, por ejemplo, en la apropiación que hace Agamben de la figura del *Homo sacer* del derecho romano, sino más bien el resultado de las prácticas concretas en las que están comprometidas la vida y el trabajo (Rabinow, 2002).

Un segundo aspecto de las teorías de soberanía y excepción que aborda nuestro trabajo son las prácticas relativas a la consolidación y la desarticulación de identidades. En este sentido, un ámbito de especial interés es la documentación mediante la cual el Estado pretende garantizar las identidades, que en la práctica suelen utilizarse para desvirtuar esas mismas identidades y garantías. Entre los diferentes tipos de documentos que expiden los Gobiernos y que supuestamente constituyen garantías de pertenencia, los pasaportes son los más distinguidos. Sin embargo, la mayor parte de la población se relaciona con el Estado por medio de documentos como las cartillas de racionamiento, las cédulas de identidad, las denuncias penales, los documentos judiciales, los certificados de nacimiento y defunción y los reportes de información presentados en las agencias de policía. Estos documentos representan tanto la distancia del Estado como su penetración en la vida cotidiana. De hecho, varios estudios afirman recientemente que a través de estas prácticas de documentación el Estado hace a la población legible para sí y crea el llamado efecto de legibilidad (Scott, 1998). Trouillot (2001: 126), por ejemplo, sugiere que el efecto de legibilidad es la "producción tanto de un lenguaje y un conocimiento para la gobernanza como de herramientas teóricas y empíricas que clasifican y regulan a los colectivos". De hecho, existe una amplia literatura sobre las prácticas cartográficas y de clasificación del Estado que señala la alianza conocimiento-poder de los nuevos modelos de gobernanza, producto de la construcción de la noción

de población (Appadurai, 1996; Dirks, 2001; Foucault, 1979; Mitchell, 1988; Perrot y Woolf, 1984; Scott, 1998; Smith, 1996).

No obstante, lo que aquí nos interesa no es cómo el Estado hace legible a la población para sí mismo, sino cómo estos documentos se incorporan a formas de vida mediante las cuales las nociones de sujetos y ciudadanos circulan entre quienes utilizan estos documentos. Por ejemplo, el capítulo de Mariane Ferme en este libro, señala cómo los documentos del Estado encubren y limitan a los inmigrantes, viajeros y refugiados que atraviesan diferentes fronteras y puestos de control. Como muestra, nos habla de un hombre cuyo documento de identidad original de Sierra Leona, ahora inválido, mostraba una identidad y una fecha de nacimiento falsas. Para demandar la ciudadanía desterritorializada como refugiado de guerra sierraleonés —y obtener así ciertos derechos en otros países de acogida—, el hombre debe adoptar esa identidad como la única que puede sustentar su nuevo estatus como refugiado. Su identidad como ciudadano sierraleonés, por tanto, existe en una relación inversa a la capacidad del Estado sierraleonés para garantizar dicha identidad.[9] En otras historias contadas por viajeros y emigrantes sierraleoneses, Ferme conoce cómo los pasaportes expedidos por los británicos durante el régimen colonial dejaron de ser válidos después de la independencia, lo que obligó a los ciudadanos que viajaban a tratar de obtener nuevos documentos en plazos de tiempo extremadamente cortos y en consulados que aún no existían. La vivencia de los tiempos del Estado es en particular importante en este caso.

9 Para un análisis de cómo el proceso de adquisición legal de un nuevo nombre está teñido de una leve mancha de criminalidad, incluso en las circunstancias más ordinarias, véase Cavell (1994: 27-28). He aquí un pasaje sobre su experiencia con el cambio de nombre a los dieciséis años: "Quizá no aprecié suficientemente la ironía de pensar qué deudas la ley podría imaginar que un chico de dieciséis años podría tener, además de tener motivos para huir, pero empecé a saber, o a saber que sabía, que el hecho de declarar un nombre, o de hacer un nombre, o cualquier cuestionamiento de tu identidad, estaba siendo vinculado con la criminalidad, forjado junto con ella. Como si las razones para ser señalado con un nombre fueran no solo ser rastreable en caso de delito, sino antes que eso como su fundamento, servir de aviso de que las acciones identificables, los hechos, la obra de los seres humanos, son la fuente de la identidad, y en consecuencia constituyen la identidad por acusación" (1994: 26). Las reflexiones de Cavell sobre la relación entre márgenes, nombres y acusaciones anticipan la experiencia de los puestos de control, de la que hablamos con más detalle a continuación, y muestran a las claras que esta experiencia no es solo una cuestión de márgenes físicos.

Así, cuando el Estado revoca los documentos de identidad por razones en apariencia arbitrarias, el informante de Ferme se siente impotente al verse obligado a esperar meses y a posponer becas, trabajo y planes de viaje en el intento desesperado por adquirir nuevos documentos de identidad y ajustarse a las nuevas y aparentemente arbitrarias exigencias del Estado. En estos casos, la ley se experimenta como una imposición en gran medida injustificada cuyos efectos constituyen lo que Ferme describe como conflictos "espacio-temporales".

El capítulo de Poole describe disrupciones temporales similares sobre cómo los campesinos peruanos se relacionan con el Estado mediante el interminable y en apariencia arbitrario papeleo que constituye su experiencia de la "justicia". En los sitios que narra, las demandas legales rara vez concluyen, y la "justicia" es vista con frecuencia no como algo que puede obtenerse, sino más bien como el vínculo efímero de los campesinos con un Estado cuya promesa de justicia adopta la forma de procedimientos interminables y un papeleo siempre inconcluso que se dispersa entre las distintas instancias del sistema judicial. El carácter pedagógico del Estado no se manifiesta aquí en los libros de texto sobre ciudadanía, sino mediante prácticas que obligan a los sujetos a aprender la brecha que separa a la membresía de la pertenencia. Poole muestra que hay cierto fundamento en el presupuesto de que los espacios que habitan estos campesinos son marginales, que carecen de carreteras, escuelas y de otras señales de la presencia del Estado. Sin embargo, lo que permite al Estado no responsabilizarse nunca de sus propias promesas es la combinación entre esta ubicación física y otras nociones sobre la marginalidad "natural" de los campesinos indígenas.

La configuración temporal y la experiencia de estos encuentros con el poder arbitrario del Estado también pueden considerarse como los espacios altamente móviles que Pradeep Jeganathan denomina con acierto en su capítulo "mapas de anticipación". Se trata de espacios en los que las pretensiones y garantías pedagógicas de la ley y la nación son alteradas por las prácticas del Estado. Para Jeganathan, como para otros autores de este volumen, el puesto de control militar o policial surge como un lugar donde esta confrontación de expectativas y legibilidades se topa con la normalidad

de lo cotidiano. Jeganathan evoca el más ordinario de los acontecimientos durante un traslado habitual al trabajo en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka: un viajero es detenido en un puesto de control y se le solicita su carné de identidad. ¿Qué puede significar esto en un país que hasta hace poco estaba inmerso en una guerra civil? Cuando los terroristas, insurgentes, militantes o luchadores sociales (el apelativo depende de cómo se interprete el conflicto) utilizan técnicas de terror y tortura como los atentados suicidas, y cuando las fuerzas de seguridad, a su vez, utilizan técnicas similares de contrainsurgencia terrorista, la pregunta sobre las fronteras del Estado está cargada de incertidumbre y riesgo, pues la producción de fronteras se desarrolla *dentro* del territorio político y social, y no fuera de él.

La movilidad propia de los espacios y entornos donde emergen las prácticas de producción de fronteras desestabiliza los lenguajes inherentemente territoriales de contención y soberanía que parecen vincular a la nación con el Estado. Por ejemplo, al escribir sobre los puestos de control en territorios en disputa de Colombia, Victoria Sanford describe cómo las distintas fuerzas militares compiten por el control de territorios concretos. En estos territorios, que en cierto modo se han convertido de verdad en "marginales" al Estado, la incertidumbre con respecto a las garantías individuales y la protección legal se confunde aún con las identidades y ubicaciones deliberadamente ilegibles de los paramilitares, que al mismo tiempo pertenecen y no al Estado. En sus reflexiones sobre los puestos de control peruanos, Deborah Poole describe cómo las intenciones e incluso la existencia del Estado se vuelven de repente ilegibles durante momentos de tensión en que se entregan a funcionarios gubernamentales los documentos de identidad. Aunque estos espacios son a menudo fugaces e impredecibles —como cuando alguien en posición de autoridad de pronto detiene a una persona para pedirle documentos en la calle—, también pueden convertirse de alguna manera en cotidianos dada la permanencia y visibilidad de los puntos de control físicos. Como señala Jeganathan en su capítulo, es por medio de estos "mapas de anticipación" como los residentes de una ciudad o zona de guerra pueden anticipar e interiorizar la imprevisibilidad de la violencia, justo a través de la previsibilidad de los lugares físicos donde

el Estado ejerce sus pretensiones en apariencia arbitrarias de soberanía sobre territorios que claramente no puede controlar.

Los márgenes tan evidentes en el punto de control también se observan en las rutinas burocráticas de la vida cotidiana moderna. Lawrence Cohen ofrece un ejemplo de este tipo de espacio en su capítulo sobre el imaginario tecnocientífico en las funciones operativas en la India. Describe un tipo de comercio de órganos en el que, al igual que el espacio de excepción, se difumina en efecto la línea entre lo legal y lo ilegal. Dado que en 1994 se prohibieron en la India tanto la venta como la donación de órganos entre personas no emparentadas, los cirujanos y otras personas que trabajan en el mercado nacional e internacional de órganos presionaron al Estado para que definiera procedimientos para autorizar formas lícitas de donación de órganos más allá del grado de parentesco legalmente definido. A los comités de autorización resultantes se les asignó la tarea de estudiar casos excepcionales donde se pudieran donar órganos fuera de los grados de parentesco establecidos. Cohen hace un sutil análisis de cómo operan estos comités para crear ficciones de afecto conmovedor entre personas no emparentadas para permitir las "donaciones" de órganos. El secreto público, por supuesto, es que las ficciones de parentesco y afecto abrumador entre el receptor y el donante se crean para encubrir la venta ilegal de órganos. En efecto, la estructura de excepciones funciona para trazar una línea entre la pertenencia y la inclusión que identifica a aquellos ciudadanos que son "biodisponibles" y, por tanto, podrían convertirse en "donantes" ficticios en una economía soterrada.[10] Además, permite el surgimiento de ciertas formas discursivas donde la ciudadanía se demanda mediante actos de "sacrificio" por parte de los pobres, un punto que exploramos con más detalle más adelante en esta introducción.

Los márgenes no son inertes

En la sección anterior hemos intentado mostrar la íntima conexión entre el derecho y los estados de excepción. Hemos argumentado que, en lugar de privilegiar las formas metafísicas de reflexión para comprender la soberanía,

10 Es importante apreciar que la venta solo pudo ser posible en un contexto más amplio en el que había personas ricas que operaban en una economía con grandes ingresos no declarados.

la antropología se centra en la práctica cotidiana. Es en los procesos de la vida diaria donde vemos cómo el Estado se reconfigura en los márgenes. Los márgenes no son simplemente espacios periféricos. A veces, como en el caso de las fronteras entre los Estados nación, las fronteras determinan lo que está dentro y lo que queda fuera. Otras veces, como en el caso de los puestos de control, los márgenes atraviesan el cuerpo político del Estado. Las fronteras y los puestos de control, como hemos visto, son espacios en los que la soberanía, como el derecho sobre la vida y la muerte, se experimenta como una posibilidad, donde se producen pánico y una sensación de peligro aun cuando "no pase nada". Paradójicamente, estos espacios de excepción son también aquellos donde la creatividad de los márgenes se torna visible a medida que se establecen formas alternativas de acción económica y política. Sugerir que los márgenes son espacios creativos no significa que las formas de la política y la economía en esos espacios, a menudo aplicadas por la necesidad de sobrevivencia, no estén plagadas de terribles peligros. Lo que queremos, sin embargo, es llamar la atención sobre el hecho de que, aun cuando ciertas poblaciones son patologizadas mediante diferentes prácticas de poder/conocimiento, no se someten pasivamente a estas condiciones. Aunque el trabajo de los historiadores subalternos ha ayudado mucho a visibilizar la agencia de los grupos subalternos en coyunturas históricas importantes, el estatus canónico de la resistencia en estos estudios oculta la relación entre estos momentos críticos y la vida cotidiana (Das, 1989). Incluso cuando la vida cotidiana se convierte en el centro del análisis, como en el trabajo de James Scott (1985) sobre las formas cotidianas de resistencia campesina, la agencia se observa principalmente en los actos de resistencia. Nuestro énfasis, en cambio, se centra en cómo los límites conceptuales del Estado se amplían y rehacen para garantizar la sobrevivencia o para procurar la justicia en la vida cotidiana. Esto no significa que consideremos que todos los tipos de márgenes sean de algún modo homogéneos, con tipos esencialmente similares de minorías, refugiados o inmigrantes. Al contrario, consideramos el carácter indeterminado de los márgenes para desarticular la solidez que a menudo se le atribuye al Estado. Tomemos como ejemplo la descripción que hace Roitman sobre las estrategias económicas que siguen los jóvenes marginados al enfrentarse a los diversos procesos reguladores del Estado.

Con el declive de los mercados tradicionales en Chad, son los mercados emergentes de drogas, armas ligeras, contrabando y mercenarios los que ofrecen oportunidades para asegurar el sustento en regiones devastadas por guerras continuas, sequías y otros desastres económicos. Por obvias razones, estos mercados florecen en las fronteras entre naciones. Roitman se niega a calificar estas actividades económicas como economías "informales" o "negras", y comprender las estrategias de los jóvenes como prácticas de creación de fronteras donde asistimos no tanto al colapso de la regulación como a la pluralización de las autoridades reguladoras. Dicha pluralización conduce a una institucionalización de la extracción de utilidades por parte del Estado, incluso cuando este proceso se produce al margen de los procedimientos legales formales. Las formas de socialización desarrolladas en estas fronteras son, por supuesto, en extremo peligrosas, pero demuestran que los márgenes, como límites propios del Estado, son también espacios donde se elaboran y amplían los límites conceptuales de la economía. Gran parte de la retórica política calificaría estas actividades económicas como "corrupción" y las interpretaría como prueba del debilitamiento del Estado. Sin embargo, desde la perspectiva de los jóvenes que estudia Roitman, estas estrategias para asegurarse el sustento utilizando el carácter indeterminado de las fronteras ofrecen un medio para reivindicar derechos económicos. Lo que está en juego es el desafío al monopolio estatal sobre los impuestos o las licencias comerciales y el esfuerzo por apropiarse de algunas de estas prácticas para garantizar la supervivencia económica. La pluralización de la regulación no crea sólo una oposición binaria entre el Estado y los márgenes, y tampoco podremos decir que el Estado sea incapaz de ejercer su dominio sobre los márgenes, ya que también maniobra para extraer rentas por medio de esta pluralización y de la ampliación de los límites conceptuales de la economía. Al considerar los márgenes podemos observar cómo la ciudadanía económica, la extracción de utilidades y los múltiples regímenes regulatorios son elementos necesarios para el funcionamiento del Estado, al igual que la excepción es necesaria para la comprensión del derecho.

El capítulo de Ferme ofrece más evidencia sobre la "arbitrariedad en el corazón de *mando*", que según ella es característica del Estado colonial. Sin embargo, esta arbitrariedad se convierte en un recurso, como revela

la informante de Ferme, ya que facilita opciones de ciudadanía para los sierraleoneses. Los emigrantes se aprovechan de las medidas de emergencia adoptadas para protegerlos como refugiados de guerra y, en algunos casos, logran utilizar las oportunidades que brindan las leyes caprichosas y arbitrarias, y conforman nuevas formas de ciudadanía económica y política que a veces van mucho más allá de los límites territoriales de los estados. Para otros, como los refugiados a los que se les niega el asilo o que mueren en tránsito, los resultados son terribles, lo que pone en evidencia los peligros de la dinámica de las fronteras (Malkki, 1995). Así, para Roitman y Ferme, las posibilidades y los límites de estas nuevas prácticas transfronterizas brindan una perspectiva importante para comprender los procesos translocales por los que se experimenta el Estado.

Un ejemplo similar de la creatividad de los márgenes en el plano político es el trabajo de las Comunidades de Paz constituidas por poblaciones desplazadas en Colombia. Sanford describe cómo las poblaciones desplazadas por los paramilitares han procurado crear zonas de seguridad, vedadas tanto a las guerrillas como al personal armado autorizado por el Estado. Con el creciente apoyo de los grupos de derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional, estas comunidades (que también actúan literalmente al margen del Estado) han reconfigurado sus espacios según sus propios imperativos. Sus formas de acción política hacen uso de la retórica global de derechos humanos. Sin embargo, en lugar de presentar demandas mediante tribunales de justicia o tribunales internacionales, priorizan la necesidad de garantizar la seguridad en el ámbito comunitario más que en el individual.

El capítulo de Ashforth ofrece otro ejemplo sobre las formas locales y específicas en que operan las ideas de justicia. Explica que el incremento en las acusaciones de brujería entre las poblaciones negras de Sudáfrica, asoladas por tasas de prevalencia y mortalidad de sida intolerablemente altas, se expresa en las exigencias al Estado post-*apartheid* para responder al sufrimiento tomando medidas frente al sida y la brujería. Pero como señala Ashforth, castigar a los delincuentes por practicar la brujería reinstauraría los prejuicios del régimen colonial y del *apartheid* en contra de las prácticas tradicionales de las poblaciones negras y las criminalizaría. De esta forma,

las acusaciones de brujería tienen que replantearse de otra forma: secuestro, rapto o asesinato. La cuestión es que la presión para orientar los sistemas del Estado hacia nociones diferentes de justicia parte de las preocupaciones cotidianas de quienes viven un modo de socialización diferente del imaginado por el aparato burocrático y racional del Estado. Es interesante recordar aquí que incluso en la noción weberiana clásica de racionalidad el derecho incluye la justicia laica en sus procesos mediante el papel del jurado, pues Weber consideraba que el jurado asumía el papel del oráculo ("debido al jurado, cierta irracionalidad primitiva la toma de decisión y, por tanto, del derecho mismo, ha sobrevivido de esta forma en el procedimiento inglés hasta nuestros días", de acuerdo con Weber, 1978: 763). Dado que la "irracionalidad primitiva" que tanto irritaba a Weber se halla en el centro de la legislación del Estado, el Estado podría ser tratado para ciertos propósitos como si estuviera al margen del ciudadano.

Otros autores en este volumen argumentan que una imagen distinta de la justicia o el bien común impulsa las actividades que tienen lugar al margen del Estado. No se trata tan sólo de un problema entre las nociones "populares" del derecho y la justicia frente a las ideas de justicia autorizadas por el Estado. Más bien, lo que está en juego en estos lugares se constituye por medio de las experiencias de los ámbitos locales, aunque debemos tener claro que los ámbitos locales y el Estado no conforman opuestos binarios. Aunque estén contenidos en relaciones desiguales, están imbricados uno en el otro. Así, por un lado, la ley es vista como signo de un poder distante pero abrumador. Por otro lado, también se observa como algo cercano a donde pueden dirigirse los anhelos locales. Así, Poole muestra cómo los campesinos en Perú depositan su deseo de justicia en el Estado, incluso cuando la ilegibilidad del Estado y de sus procedimientos frustra sus pretensiones, cuando los documentos necesarios para garantizar la justicia circulan interminablemente entre diferentes jurisdicciones. No queremos decir que las poblaciones en los márgenes consiguen siempre que el Estado responda a sus nociones de justicia o bien común, tampoco queremos idealizar la creatividad en los márgenes. De hecho, como lo demuestra el capítulo de Nelson, al mismo Estado identificado como causante del terror y responsable de la política de la tierra quemada en

Guatemala, le fue conferida la aspiración de justicia. Categorías que podrían haber sido inmutables, como víctimas y agresores, se convirtieron en altamente móviles. El problema entonces no es si los anhelos, miedos y esperanzas alimentados en los márgenes y luego proyectados hacia el Estado son de alguna manera más éticos, justos o puros. Más bien, la complejidad de la experiencia vivida influye en las nociones de justicia y derecho a partir de los diferentes imaginarios disponibles en cada sitio y de las representaciones oficiales de la justicia y el derecho.[11]

Los capítulos de Das y Nelson ofrecen ejemplos adicionales sobre cómo la legislación está colonizada por otras ideas legales/jurídicas. Das cita el conmovedor caso de las viudas de la comunidad Siglikar de Delhi cuyos maridos murieron en los disturbios de 1984. Ellas intentaron reclamar las indemnizaciones que les había concedido el Gobierno. Los siglikar vivían en la periferia de la ciudad. Pero lo más importante es que sus nociones de comunidad y justicia se basaban en comprensiones diferentes de socialización. El Gobierno consideraba que las viudas eran las destinatarias de la indemnización, pero la opinión dominante en la comunidad era que los padres de los muertos debían recibir el dinero. El conflicto lo resolvió a la postre el panchayat de la casta de los siglikars, y el dinero se dividió a partes iguales entre los contendientes. Lo interesante es que el acuerdo se consideró un compromiso y se formalizó en papel timbrado por la Corte, como si eso otorgara validez al acuerdo ante

11 Para un argumento sutil sobre el papel de las racionalidades alternativas practicadas en los márgenes en la interpretación del terror de Estado, véase el relato de Humphrey (2003) sobre los mitos budistas de la reencarnación utilizados por los budistas de Mongolia para explicar el régimen de terror de Stalin. En esta formulación, la teoría del karma se despliega metafóricamente para reconocer la complicidad inevitable de los súbditos de los estados totalitarios en los regímenes de terror, un punto sutil que es algo similar al argumento de Nelson en su capítulo. Anteriormente, Tsing (1993) analizó la importancia de los márgenes como forma de relacionar la creatividad disciplinaria con formas de vida vividas en los márgenes en el contexto del Estado en Indonesia. Sin embargo, la idea de Tsing sobre los márgenes está fuertemente influida por modelos espaciales; así, define el margen como un lugar en el que la autoridad estatal es poco fiable y es mayor la brecha entre los objetivos del Estado y su realización local. Contrasta esta situación con el proyecto de gobierno en el centro, donde la autoridad estatal es más fuerte. Esta forma de ver el Estado y los márgenes, por supuesto, supone que los objetivos y la autoridad del Estado son transparentes en el centro, o que el propio Estado no se esfuerza por mantener los márgenes como "espacios rebeldes", un punto de vista criticado por todos los autores de este volumen.

los ojos de la ley. Así, la legitimidad se procuró mediante la ley del Estado; este compromiso no se atribuyó al derecho consuetudinario ni se trató como un acuerdo privado entre las partes implicadas. La emulación del Estado para legitimar un acuerdo coercitivo en muchos aspectos puede interpretarse como hacer del Estado un fetiche, pero también demuestra la lealtad de la comunidad a la idea de derecho establecida por el Estado y, por tanto, reivindica la ciudadanía para estas comunidades. Estos márgenes donde se aplica una imagen diferente del bien común no son solo espacios donde el Estado aún no ha penetrado, sino más bien pueden considerarse como sitios donde el Estado se recrea continuamente en los entresijos de la vida cotidiana.[12]

En el capítulo de Nelson, podemos observar cómo la cualidad engañosa del Estado le permite escapar de sus obligaciones al hacer que la justicia se encuentre fuera del alcance de los campesinos. En su relato sobre la Guatemala de la posguerra, Nelson describe cómo el Estado contrainsurgente difundió la imagen del indio tramposo o "dos caras" para justificar las incursiones militares en zonas indígenas, el reasentamiento de comunidades indígenas en caseríos y la declaración de un estado de emergencia en varios sitios del país. Sin embargo, Nelson utiliza esta representación del indio para comprender la representación del Estado y se pregunta por qué el Estado también es visto como si tuviese dos caras, embaucador, conveniente, engañoso y peligroso. De esta forma, trastoca la imagen estereotipada de un Estado que emula a los indígenas astutos de dos caras. La etnografía de Nelson sobre el Estado lo coloca en una situación cambiante donde el Estado es a la vez temido y deseado.

El relato de Nelson nos hace dudar de la idea de que el Estado es legible mientras las poblaciones son ilegibles. Sin embargo, gran parte de la teoría antropológica se ha concentrado en comprender cómo el Estado despliega tecnologías de conocimiento y poder para hacer legibles a las poblaciones

12 Tal vez sea pertinente señalar que, si bien la comprensión del *proceso* siempre se consideró fundamental para la antropología del derecho, siempre se hizo hincapié en llegar a las *normas* que se consideraban implícitas en la resolución de conflictos (Gluckman, 1965; Nader, 1969, entre muchos otros). Una distinción tajante entre las formas occidentales y no occidentales del derecho oscurecía el modo en que los conceptos jurídicos viajaban entre los distintos lugares en los que se evocaba el derecho en una misma sociedad.

(Appadurai, 1996; Cohn, 1987; Trouillot, 2001). Sin embargo, como hemos mencionado en apartados anteriores, los mismos documentos que pretenden establecer la identidad adquieren existencias diferentes a medida que tanto los funcionarios del Estado como los ciudadanos comunes los utilizan con distintos fines. Como Poole demuestra con claridad en su capítulo, la posibilidad de falsificación y los documentos alterados sitúan a los ciudadanos entre los polos de la amenaza y la garantía. Al mismo tiempo, el Estado se hace presente en los márgenes mediante los ámbitos del lenguaje que cobran existencia cuando es difícil acceder al contexto. Así, florece el rumor: el Estado sostiene que las poblaciones analfabetas y poco instruidas son fáciles de engañar. Como argumenta Nelson, el Estado tiene dos caras, es inasequible y, en muchos sentidos, constituye el espacio donde se experimenta lo siniestro. Sin embargo, el Estado acusa a sus súbditos de ser emotivos (y podríamos añadir incrédulos, y construye así una imagen de sí mismo como "racional", como argumentan Das y Cohen en este volumen). En el capítulo de Ashforth, encontramos que las medidas para controlar la transmisión del VIH son interpretadas por los negros en Sudáfrica como medidas para limitar la reproducción de las poblaciones negras. Esta comprensión parece ser un legado del régimen del *apartheid* y su política de muerte. De esta manera, los rumores y el aura de sospecha sobre las "verdaderas" intenciones del Estado al instituir políticas que afectan al cuerpo, la sexualidad y la reproducción deben entenderse en el contexto de las historias locales específicas de esta sociedad. El hecho de que las acusaciones de brujería se asemejen a un rumor —su falta de firma (Bhabha, 1994a; Das, 1998; Geschiere, 1997), su poder de elocución— las vincula a la incertidumbre de las relaciones donde se viven los efectos devastadores de la epidemia del sida. El problema no es que el rumor sea una forma de comunicación característicamente "subalterna", como sugiere Guha (1983), sino que el modo en que el Estado representa a sus sujetos como entregados a la emoción más que a la razón se vuelve contra el Estado, por decirlo de algún modo (véase también el capítulo de Nelson sobre este punto). La experiencia letal del sida y su vínculo con acusaciones de brujería, rumores y pánico nos regresa a la cuestión del Estado con el que se constituyen de manera conjunta la biopolítica y la

tanatopolítica. Sostenemos que esta relación, que subyace en el núcleo del Estado moderno, es mucho más visible en los márgenes que en el centro. Nos ocupamos a continuación de estas consideraciones.

Biopolítica y márgenes

Antes hemos argumentado que la soberanía puede definirse mejor en términos del poder sobre la vida y la muerte. Es importante subrayar que la noción vida no equivale a algún elemento de naturaleza animal sin ninguna relación con la ley, sino que es producida por la ley. Tanto Agamben (1998; 2000) como Foucault (1976; 2003) han argumentado de diferentes maneras que el Estado se constituye en la modernidad mediante la inclusión de la vida humana (natural) en los mecanismos y cálculos del poder. Sin embargo, a pesar de este acuerdo en torno a la biopolítica, existen entre estos dos autores profundas diferencias en cómo conciben la relación entre biopolítica y tanatopolítica. Para Agamben, el referente negativo de la nueva soberanía biopolítica es la figura del *Homo sacer* —la vida que puede ser asesinada, pero no sacrificada— y su ejemplo paradigmático en la modernidad es el campo de concentración. Para Foucault, el referente negativo de la biopolítica es al parecer la distinción entre aquellos cuyas vidas son gestionadas y mejoradas y aquellos cuyas vidas son juzgadas como no dignas de ser vividas y a las que, por tanto, se les "deja morir". Ambos autores parecen igualmente preocupados por una aparente contradicción en la concepción del Estado biopolítico, a saber, cómo puede un Estado comprometido con la gestión de la vida producir una categoría de personas consideradas matables. Para Agamben, lo que une a la biopolítica con la política de la muerte es el recurso interminable que tiene el Estado en el estado de excepción, mientras que, para Foucault, la preocupación se centra mucho más en el poder de las rutinas cotidianas y, por tanto, en la producción de lo "normal". Aunque no es este el lugar para profundizar en estas diferencias, las utilizamos para llamar la atención sobre cómo el método etnográfico nos permite plantear estas cuestiones.

Como es bien sabido, la obra de Foucault acerca del biopoder sustituye el privilegio de la ley y la prohibición por el énfasis en la eficacia táctica

en un campo de fuerzas múltiple y móvil. Demuestra que los efectos son de largo plazo, pero nunca estables. Su meticulosa descripción del impacto de las estadísticas y la invención de la población como objeto de conocimiento y regulación en las nociones cambiantes de soberanía ha permitido reconceptualizar el Estado de manera importante, en particular al desplazar el énfasis en las autoridades locales hacia la gestión de la vida (véase también Perrot y Woolf, 1984). Así, en la literatura reciente observamos una proliferación de adjetivos utilizados para caracterizar al Estado —el Estado *higiénico*, el Estado *inmunizador*, el Estado *terapéutico*—, que apuntan a una modalidad diferente de gestión de la vida. Al mismo tiempo, el prefijo *bio-* se ha separado del poder para señalar otros tipos de socialización, como la *biosocial,* u otros tipos de recursos, como *el biocapital*, y para referirse a nuevas formas de ejercer el poder, por ejemplo, grupos de pacientes que se organizan para influir en la asignación de recursos y la orientación de la investigación para mitigar ciertas condiciones biológicas. Esta diversidad de formas en que el Estado participa en la administración de la vida (y en el concomitante dejar morir), así como los reclamos que se hacen al Estado en ámbitos de vida y muerte reivindicando nuevas categorías de ciudadanía, son un espacio fructífero donde la antropología puede abordar las formas emergentes de biopolítica (Petryna, 2002).

Por supuesto, el *locus classicus* para examinar el poder del Estado para controlar a las poblaciones se encuentra en la literatura sobre epidemias y la formación del Estado. Como ha argumentado recientemente Peter Baldwin (2001), las estrategias concretas de control desarrolladas por el Estado en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX estaban estrechamente vinculadas a la gestión del contagio. Además, la preocupación por regular la salud de las poblaciones nos remite de inmediato a las conexiones entre las metrópolis y las colonias, en el control de epidemias, pues esta era una condición necesaria para superar los obstáculos a la explotación europea de las colonias. Así, la preocupación por las condiciones sanitarias de las colonias y las técnicas de manejo de enfermedades pasaron a formar parte del repertorio de acciones del Estado. A modo de ejemplo, podemos mencionar los grandes cambios legislativos derivados

de leyes como la de vacunación obligatoria, la de mendigos leprosos, la de locos, la de cuarteles y las diversas normas sobre enfermedades contagiosas promulgadas en este periodo por los Estados europeos, tanto en los centros metropolitanos como en las colonias. Lo importante desde la perspectiva de las colonias es que tanto los debates públicos sobre estos problemas como las justificaciones científicas construyeron una idea de los habitantes de las colonias como crédulos, antihigiénicos, irracionales e indisciplinados. El gran logro de Foucault fue demostrar que el biopoder no solo consistía en patologizar a las poblaciones, sino también que aquello aplicable a los márgenes podía generalizarse y normalizarse para poblaciones enteras. Sin embargo, la constante producción de patologías es una importante herramienta del poder, pues en este ámbito, como en los revisados antes, podemos observar las íntimas conexiones entre el poder soberano y el poder disciplinario.

La gestión de poblaciones en los espacios que Cohen denomina en su capítulo "modernidad a secas" demuestra que no podemos asumir una lógica inexorable en la gestión de la vida que se desarrolla de la misma forma en todas las sociedades. Las sociedades poscoloniales como India y Sudáfrica tienen historias específicas donde la dinámica de las relaciones moldea la manera en que se instituye la biopolítica. Así, la historia de la modernidad se complica en este ámbito como en todos los demás (Geschire, 1997; Gilroy, 1993; Mitchell, 2000). Las poblaciones, como hemos argumentado en la sección anterior, pueden existir en el imaginario del Estado tan solo como entidades que se deben administrar, pero los habitantes de estos márgenes no son objetos inertes: las formas de gobierno, las relaciones sociales en diferentes ámbitos y los grupos culturales dentro de los cuales el lenguaje adquiere vida, dan lugar a relaciones con el Estado biopolítico imposibles de determinar mediante la especulación metafísica. Los capítulos de Cohen, Ashforth, Das y Sanford muestran que, aunque el Estado biopolítico opera con la noción de un cuerpo masivo de una forma u otra, las técnicas de gestión en estos contextos son bastante diferentes. Y lo que es aún más importante, la manera en que las poblaciones "gestionadas" hacen uso de estrategias de control para reclamar la ciudadanía están profundamente influidas por experiencias específicas con el Estado.

Así, mientras que las categorías de refugiado y desplazado existen como categorías jurídicas especiales en los instrumentos internacionales que las controlan y les otorgan derechos, las negociaciones desarrolladas por las Comunidades de Paz para mantener a los guerrilleros y al Estado fuera de sus territorios llevan sin duda el sello de su experiencia particular con la violencia. Del mismo modo, la gestión de la epidemia del sida en Sudáfrica debe abordar necesariamente las acusaciones de brujería como un problema para el Estado. En el caso de la India, la política del cuerpo masivo se instituyó mediante programas de planificación familiar que incluían campamentos de esterilización masiva, pero que también formaban parte de un conjunto de instituciones de beneficencia y públicas para otros asuntos, como los campamentos masivos de salud o los campamentos oftalmológicos para las operaciones de cataratas. Así, el modo en que la gestión de la vida se convirtió en objeto de la política define, de hecho, el Estado biopolítico, pero las historias específicas son tan distintas que no puede hablarse de una matriz ya resuelta. Tal vez podamos ilustrar este punto con los ejemplos específicos de Cohen sobre las formas de demandas de la ciudadanía a través del tema de la operación en la India.

En su capítulo, Cohen sugiere que tres conceptos —*operabilidad*, *biodisponibilidad* y *complementariedad*— explican cómo se manifiesta de forma concreta el Estado biopolítico en la India. Diversas poblaciones marginales, como los *hijras* (intersexuales, transexuales, comúnmente conocidos como el tercer sexo), los cuerpos tratados como una masa en las acciones de planificación familiar realizadas en campamentos médicos y los vendedores de riñones en el comercio de órganos, se definen todos a partir de las intersecciones particulares entre estos tres conceptos. Como dice Cohen, las operaciones se convierten no solo en una técnica y un lugar de instauración del Estado, sino también en una forma de establecer las posibilidades y los límites de pertenencia de las personas consideradas parte de una masa dotada de emoción, pero no de razón en el imaginario estatal. Así, la tarea de convertir a aquellos que habitan cuerpos masificados en modernizadores ascéticos portadores de razón es exclusiva de la dinámica cultural de la India donde se han aplicado los paradigmas del desarrollo. Lo más interesante de este argumento es que, mediante

una lógica de excepción, el cuerpo genérico de las masas se traduce en tipos de cuerpos específicos que pueden recuperar órganos mediante la venta, a pesar de que el comercio de órganos esté prohibido. La lógica de la excepción contribuye a crear la ficción del "afecto abrumador" entre comprador y vendedor, como ya hemos mencionado, a pesar del secreto público de que esta ficción es creada para encubrir la venta de órganos en la forma mítica del regalo. La operación en sí misma es vista por las poblaciones marginadas como una manera de reivindicar la ciudadanía a través de los tropos del don y el sacrificio. No es que la incidencia de la venta de riñones en la India sea muy alta, pues los vendedores se concentran en localidades y regiones concretas. Sin embargo, la posibilidad del trasplante ha permitido la emergencia de nuevas formas discursivas y conversaciones a todos los niveles, desde el doméstico hasta el nacional.

Los hermanos hablan de vender riñones para conseguir dotes para sus hermanas; las esposas, para liberar a la familia de las deudas. Los ciudadanos más marginados afirman que donarían riñones para salvar la vida de dirigentes nacionales o regionales enfermos.

El concepto de biodisponibilidad, introducido por Cohen, se distancia bastante de la noción de cuerpos matables mediante el precepto del *Homo sacer*, pues son pobres a quienes no se mata, sino que se dejan morir. De hecho, la retórica utilizada por quienes defienden la venta es colocar estos cuerpos a disposición de la intervención médica, pero plantean esta idea en términos de la autonomía individual y el cuidado de los pobres. Este ejemplo constituye una asombrosa demostración sobre cómo alejarse de las concepciones metafísicas y sobre cómo "funciona" la excepción para abrazar la tarea de hacer del Estado biopolítico un objeto de investigación etnográfica. Si el concepto de individuo peligroso de Foucault nos mostró cómo el derecho fue colonizado por las disciplinas de la psiquiatría forense francesa (Foucault, 2003), los conceptos ofrecidos por Cohen muestran cómo el don y el sacrificio no han sido desplazados por la modificación, sino que más bien permiten que esta funcione en conjunto con otras formas de reivindicar la ciudadanía.

Reflexiones finales

No podemos hacer más en estas reflexiones finales que remitir al lector al Capítulo 11, donde Talal Asad ofrece un comentario breve y provocador sobre las cuestiones teóricas relativas al Estado y sus márgenes. Podemos destacar aquí dos puntos importantes. En primer lugar, Asad sostiene que la noción de Estado en el pensamiento contemporáneo le confiere una vida propia, distinta tanto de los gobernantes como de los gobernados. Debido a esta abstracción, el Estado puede reclamar la lealtad de ambas partes. Cuando la relación entre el Estado y los gobernados se concibe como una relación donde el Estado encarna la soberanía con independencia de la población, se le autoriza a mantener ciertos espacios y poblaciones en los márgenes por medio de sus prácticas administrativas. Al contrario, una concepción del Estado como aquel al que se delega el poder, en lugar de alienarse de los sujetos, permitiría que el propio Estado fuera comprendido como los márgenes del cuerpo ciudadano. No se trata de demostrar que el Estado tiene un carácter fetichista, sino de señalar que la comprensión de la soberanía puede desplazar la posición relacional del centro y la periferia: los márgenes se mueven tanto dentro como fuera del Estado. Por supuesto, este movimiento es lo que provoca que los márgenes sean fundamentales para la comprensión del Estado. La indeterminación de los márgenes no solo genera formas de resistencia, sino que, de forma aún más importante, posibilita estrategias para vincularse con el Estado como si fuera una especie de margen al cuerpo de ciudadanos.

En segundo lugar, Asad introduce la importante idea de que la igualdad formal y la sustitución de los ciudadanos en la teoría liberal descansan, de hecho, en incertidumbres inherentes al proceso de abstracción de una categoría dada a otra. El autor realiza una bella descripción sobre cómo la sospecha llega a ocupar el espacio entre la ley y su aplicación, un proceso que todos los capítulos abordan de una u otra forma. Esta discusión nos invita a pensar en las categorías de potencialidad, anticipación y sombras, categorías que captan la experiencia de los márgenes actualizada a los espacios de excepción. Nuestra comprensión de los márgenes no los muestra como espacios y poblaciones inertes que solo hay que gestionar,

sino más bien como llenos de vida que ciertamente se gestiona y controla, pero que también fluye fuera de este control. Así, aunque tenemos mucho que aprender de las brillantes contribuciones de Agamben y Foucault sobre cómo la vida cotidiana llega a ser tratada como un objeto de la política, las estrategias de conocimiento antropológico no se limitan a tomar estas categorías y aplicarlas en diferentes situaciones. Más bien, en las genealogías y las historias particulares de las formas de socialización que estudian, los antropólogos muestran cómo diferentes deseos, esperanzas y temores moldean la experiencia del Estado biopolítico. Los autores de este volumen son plenamente conscientes de la precariedad de la vida en los márgenes, pero también les preocupa mostrar cómo las formas de acción económica y política, y las ideas de don y sacrificio que han sido relegadas a los márgenes, pueden también, en ciertos momentos, reconfigurar el Estado como margen del cuerpo-ciudadano. En una de sus reflexiones políticas, Agamben explica que sólo rompiendo el nexo, en cualquier punto entre el "enredo viciado del lenguaje, el pueblo y el Estado", el pensamiento y la praxis estarán a la altura de la enorme tarea "que tenemos entre manos" (Agamben, 2000: 67-69). La tarea "que tenemos entre manos", esperamos, es que el trabajo realizado en los márgenes sea reconocido por lo que es. Puede que no sea capaz de romper tal nexo de una vez por todas, pero demuestra que las derrotas y victorias de la vida cotidiana tienen la capacidad de regresarnos de lo metafísico a lo ordinario. En todo caso, así es como consideramos restituido el objetivo etnográfico.

Referencias[13]

Abélé, M. 1990. *Anthropologie de l'état*. Armand Colin.

Abrams, Philip. 1988. "Notes on the Difficulty of Studying the State." *Journal of Historical Sociology* 1 (1): 58–89.

13 N. de T. Algunas referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias difieren de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Agamben, G. 1998. *Homo sacer: sovereign power and bare life*. D. Heller-Roazen, Trad. Stanford University Press.

Agamben, G. 2000. *Means without ends: notes on politics*. University of Minnesota Press.

Appadurai, Arjun. 1996. "Numbers in the Colonial Imagination." En *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, 114–135. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Asad, T. 2003. *Formations of the secular: christianity, islam, modernity*. Stanford University Press.

Balandier, G. 1951. La situation coloniale: approche théorique. *Cahiers Internationaux de Sociologie* 11.

Baldwin, P. 2001. *Contagion and the state in Europe, 1830-1930*. Cambridge University Press.

Banton, M. (ed.). 1966. *The social anthropology of complex societies*. ASA Monograph 4. Tavistock.

Bataille, G. 1989. *The accursed share*. Zone Books.

Benjamin, W. 1986. Critique of violence. En *Reflections: essays, aphorisms, autobiographical writings*. Hartcourt Brace Jovanovitch. (Publicación original, 1978).

Bhabha, H. K. 1994. By bread alone: signs of violence in the mid-nineteenth century. En *The location of culture* (198 -211). Routledge.

Bose, S. y A. Jalal. 1997. *Nationalism, democracy and development: state and politics in India*. Oxford University Press.

Cavell, S. 1994. *A pitch of philosophy: autobiographical exercises*. Harvard University Press.

Chatterjee, P. 1997. *State and politics in India*. Oxford University Press.

Clastres, P. 1974. *Société contre l'état*. Les Editions de Minuit.

Cohn, B. 1987. Census, social structure and objectivization in South Asia. En *Anthropologist among the historians* (224). Oxford University Press.

Coronil, F. 1997. *The magical state: nature, money and modernity in Venezuela*. University of Chicago Press.

Coriat, P. 1993. *Governing the Nuer. Documents in Nuer history and ethnography, 1922-1933.* Jaso.

Das, V. 1989. Subaltern as perspective. En R. Guha (ed.). *Subaltern studies VI* (310-324). Oxford University Press.

Das, V. 1995. *Critical events*: *an anthropological perspective on contemporary India*. Oxford University Press.

Das, V. 1998. Official narratives, rumour, and the social production of hate. *Social Identities*, *4*(1), 109-130.

Das, V. y R. S. Bajwa. 2000. The cholera vaccine: trajectories in contemporary Bengal. *Economic and Political Weekly*, *35*, 2000.

Das, V., A. Kleinman, M. Ramphele y P. Rynolds. 2001. *Violence and subjectivity*. University of California Press.

Derrida, Jacques. 1992. "Force of Law: The 'Mystical Foundation of Authority'." In *Deconstruction and the Possibility of Justice*, edited by Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, and David Gray Carlson, 3–67. New York/London: Routledge.

Deleuze, G. y F. Guattari. 1983. *Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia*. University of Minnesota Press. (Publicación original, 1972).

Deleuze, G. y F. Guattari. 1987. *A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia*. B. Massumi, Trad. University of Minnesota Press.

Dirks, N. 2001. *Castes of mind: colonialism and the making of modern India*. Princeton University Press.

Dumézil, G. 1956. *Aspects de la function guerrière chez les Indo-Européens.* Presses Universitaires de France.

Dunn, J. 1995. *Contemporary crisis of the nation state?* Blackwell Publishers.

Engels, F. 1972. *The origins of the family, private property and the state*. Pathfinders Press. (Publicación original, 1884).

Evans-Pritchard, E. E. 1940. *The Nuer: a description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people*. Clarendon Press.

Feldman, A. 1991. *Formations of violence. The narrative of the body and political terror in Northern Ireland.* University of Chicago Press.

Ferguson, James, y Akhil Gupta. 2002. "Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Governmentality." *American Ethnologist* 29 (4): 981–1002.

Ferme, M. C. 2001. *The underneath of things: violence, history and the everyday in Sierra Leone*. University of California Press.

Filmer, R. 1949. *Patriarcha and other political writings.* P. Laslett, Ed. Blackwell.

Fitzpatrick, Patricia. 2001. "Bare Sovereignty: Homo Sacer and the Insistence of Law." *Theory & Event* 5 (2): 1–14..

Fried, M. 1967. *The evolution of political society*. Random House.

Foucault, M. 1976. *The history of sexuality. Volume 1: an introduction*. R. Hurley, Trad. Random House.

Foucault, Michel. 1979. "Governmentality." En *Ideology and Consciousness*, pp. [pendiente de verificación]. Harvester Press..

Foucault, M. 2003. *Society must be defended: lectures at the College de France, 1975-1976*. D. Macey, Trad. Picador.

Fuller, C. J. y J. Harris. 2000. For an anthropology of the modern Indian state. En C. J. Fuller y V. Bénéï. (eds.). *The everyday state and society in modern India* (1-30). Social Science Press.

Geschiere, P. 1997. *The modernity of witchcraft: politics and the occult in postcolonial Africa*. University of Virginia Press.

Gledhill, J. 1994. *Power and its disguises: anthropological perspectives on politics*. Pluto Press.

Gilroy, P. 1993. *The black Atlantic: modernity and double consciousness*. Harvard University Press.

Gluckman, M. 1963. *Order and rebellion in tribal Africa*. Cohen and West.

Godelier, M. y M. Strathern. 1991. *Big men and great men: personifications of power in Melanesia*. Cambridge University Press.

Guha, R. 1983. *Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India*. Oxford University Press.

Gupta, Akhil. 1995. "Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics and the Imagined State." *American Ethnologist* 22, n. 2: 375–402.

Hansen, T. y F. Stepputat. 2001. *States of imagination: ethnographic explorations of the postcolonial state*. Duke University Press.

Hegel, G. W. F. 1991. *Elements of the philosophy of right*. A. W. Wood, Ed., H. B. Nisbett, Trad. Cambridge University Press. (Publicación original, 1821).

Herzfeld, M. 2001. *Anthropology: theoretical practice in culture and society*. Blackwell Publishers.

Heyman, J. M. (ed.). 1999. *States and illegal practices*. Oxford University Press.

Hobbes, T. 1968. *Leviathan*. Penguin Classics. (Publicación original, 1651).

Humphrey, C. 2003. Stalin and the blue elephant: paranoia and complicity in post-community metahistories. En T. Sanders y H. West (coords.). *Transparency and conspiracy: ethnographies of suspicion in the New World Order* (175-203). Duke University Press.

Hutchinson, S. E. 1996. *Nuer dilemmas: coping with money, war and the state*. University of California Press.

Kant, I. 1965. *The metaphysical elements of justice*. J. Ladd, Trad. Bobbs-Merrill. (Publicación original, 1797).

Kohli, A. 1990. *Democracy and discontent. India's growing crisis of governability*. University Press.

Locke, J. 1988. *Two treatises of government*. P. Laslett, Ed. Cambridge University Press. (Publicación original, 1690).

Lomnitz, C. 2000. Introducción. En *Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México*. Ciesas.

Maine, H. S. 2002. *Ancient law*. Transaction Press. (Publicación original, 1866).

Malkki, L. 1995. *Purity and exile: violence, memory and national cosmology among Hutu refugees in Tanzania*. University of Chicago Press.

Maurer, B. 1997. *Recharting the Caribbean: land, law and citizenship in the British Virgin Islands*. University of Michigan Press.

Mbembe, A. 2000. At the edge of the world: boundaries, territoriality and sovereignty in Africa. *Public Culture*, *12*(1), 259.

Mbembe, A. 2001. *On the postcolony*. University of California Press.

Meillassoux, C. 1981. *Maidens, meals and money*. Cambridge University Press. (Publicación original, 1975).

Messick, B. 1993. *The calligraphic state: textual domination and history in a Muslim society*. University of California Press.

Mitchell, T. 1988. *Colonising Egypt*. Cambridge University Press.

Mitchell, T. 2000. *Questions of modernity*. University of Minnesota Press.

Monga, C. 1996. *The anthropology of anger: civil society and democracy in Africa*. L. L. Fleck, Trad. Lynne Rienner Publishers.

Montesquieu, C.-L. 1977. *The spirit of laws*. David Wallace Carrithers, Ed. University of California Press. (Publicación original, 1748).

Morgan, L. H. 1877. *Ancient society*. H. Holt.

Nader, L. 1969. *Law in culture and society*. Aldine Press.

Nordstrom, C. 1995. *Fieldwork under fire.* University of California Press.

Ong, A. 1999a. Clash of civilization or Asian liberalism? An anthropology of the state and citizenship. En H. Moore (coord.). *Anthropological theory today*. Polity Press.

Ong, A. 1999b. *Flexible citizenship: the cultural logic of transnationality*. Duke University Press.

Pantham, T. 2003. The Indian nation-state: from pre colonial beginnings to post-colonial reconstructions. En V. Das (coord.). *The Oxford companion to sociology and social anthropology* (1413-1446). Oxford University Press.

Perrot, J. C. y S. J. Wolf. 1984. *State and statistics in France, 1789-1815*. Harwood Academic Publishers.

Petryna, A. 2002. *Life exposed: biological citizens after Chernobyl*. Princeton University Press.

Rabinow, P. 2002. Midst anthropology's problems. *Cultural Anthropology*, *17*(2), 135-149.

Rao, A. y M. Casimir. 2002. Movements of peoples: nomads in India. En V. Das (ed.). *The Oxford companion to sociology and social anthropology*. Oxford University Press.

Rosenthal, F. (trad.). 1969. *The Muquddimah: an introduction to history*. Princeton University Press.

Rousseau, J. J. 1981. *The social contract.* Penguin Books. (Publicación original, 1792).

Sanders, T. y H. West. 2002. *Transparency and conspiracy: ethnographies of suspicion in the New World Order.* Duke University Press.

Schmitt, C. 1988. *Political theology: four chapter and the concept* of sovereignty. G. Schwab, Trad. MIT Press. (Publicación original, 1922).

Scott, J. 1985. *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Scott, J. 1998. *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Smith, G. 1999. Overlapping collectivities: local concern, state welfare and social membership. En *Confronting the present: towards a politically engaged anthropology* (195-227). Berg.

Smith, R. S. 1996. *Rule by records: land registration and village custom in early British Punjab*. Oxford University Press.

Sluka, J. A. 2000. *Death squads: the anthropology of state terror*. University of Pennsylvania Press.

Taussing, M. 1997. *The magic of the state*. Routledge.

Troulliot, R. 2001. The anthropology of the state in the age of globalization: close encounters of the deceptive kind. *Current Anthropology*, *42*(1), 126-138.

Tsing, A. 1993. *In the realm of the Diamond Queen: marginality in an out-of-the- way place*. Princeton University Press.

Vincent, J. 1990. *Anthropology and politics: visions, traditions and trends*. University of Arizona Press.

Vries, H. de. 2002. *Religion and violence: philosophical perspectives from Kant to Derrida*. John Hopkins University Press.

Weber, M. 1978. *Economy and society*. University of California Press.

Wolf, E. 1982. Europe *and the people without history*. University of California Press.

SECCIÓN C.
INTRODUCIENDO LA SUBJETIVIDAD EN EL ANÁLISIS Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL. LAS POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN

15. Historias falsas de los bosques y análisis sociales cómplices: repensando algunas narrativas ambientales de África Occidental[1]

James Fairhead y Melissa Leach

Resumen: El análisis desde las ciencias sociales ha ayudado a explicar la vertiginosa y reciente deforestación que se supone ha ocurrido en Guinea, África Occidental. Una narrativa sobre el crecimiento demográfico y el desmoronamiento de la autoridad y la organización comunitaria anteriores, que alguna vez mantuvieron la vegetación "original" del bosque, orienta las políticas públicas. En dos casos, la historia de la vegetación contradice fuertemente el análisis de la deforestación, de modo que expone las suposiciones detrás de la narrativa social que sostiene ese análisis; suposiciones estabilizadas por narrativas regionales que provienen más de la imaginación occidental que de las realidades africanas. Para cada caso y luego en el plano regional, proponemos hipótesis más apropiadas para explicar mejor el cambio demostrable en la vegetación y brindar lineamientos más apropiados para las políticas públicas.

Introducción

Este trabajo examina algunos análisis desde las ciencias sociales que se utilizan para explicar la degradación ambiental y articular respuestas políticas ante ella. Nos centramos en dos casos pertinentes para explorar la producción de conocimiento aplicado en ciencias sociales entre los humanos y su ambiente. Son un ejemplo del tipo de análisis social que a menudo se trae a colación para explicar la degradación en África, aunque se puede demostrar que lo que explican tan hábilmente no ha ocurrido en realidad.

1 Publicado originalmente en: James Fairhead y Melissa Leach, 1995, "False forest history, complicit social analysis: rethinking some West African environmental narratives", *World Development*, 23(6), 1023-1035..

Nuestros ejemplos exponen con claridad un espectro de suposiciones en las que suelen basarse los análisis desde las ciencias sociales, tanto los llevados a cabo por científicos sociales como los que no. Estas suposiciones tienen potencia y credibilidad en gran parte porque están vinculadas, difundidas y estabilizadas dentro de "narrativas" (Roe, 1991), es decir, historias con una lógica en apariencia incontrovertible, llenas de guiones y justificaciones para las acciones de desarrollo. Sin embargo, una vez diseccionadas de la realidad que pretenden construir, estas explicaciones sirven para revelar cómo se pueden usar las ciencias sociales aplicadas para dar peso a las percepciones occidentales populares de la sociedad y el ambiente africano —una realidad mítica cuyas intervenciones de desarrollo actúan en vano para recrear—. Al despojar lo explicado de sus explicaciones, nuestros casos abren el camino para repensar las relaciones entre los humanos y el ambiente en esta región, lo cual logramos al impulsar categorías de suposiciones alternas estabilizadas por narrativas que encajan mejor con los hechos.

Los casos específicos aquí abordados conciernen a la zona marginal del bosque de Guinea. Articulan, de diferentes formas, la postura de que las instituciones comunitarias locales alguna vez fueron más capaces de controlar los recursos ambientales de lo que son hoy y, por ende, de mantener un ambiente boscoso y resistir ante la presión de su degradación. Esta articulación facilita que la supuesta pérdida del bosque se explique en términos de "desmoronamiento institucional". Entonces se invoca un arsenal de presuntos factores para atribuirles la ruptura social, cuyos resultados parecen tan evidentes en un paisaje degradado. Estos factores incluyen el cambio socioeconómico y la comercialización, un aumento en la movilidad, el debilitamiento de la autoridad tradicional, una agricultura más individualizada, las nuevas aspiraciones económicas y culturales de la juventud, nuevos enclaves sociales, la alienación del control local de los recursos hacia estructuras del Estado y el surgimiento de una producción "anárquica" de carbón vegetal, combustible de madera y leña para surtir el mercado urbano. Al impacto de la migración se suman estos argumentos: la integración ecoétnica vinculada alguna vez al "pueblo del bosque", cuyos estilos de vida son supuestamente benignos, ha sido perturbada por la migración o influencia de los "pueblos de la sabana". En superposición a todo eso yace el fantasma del crecimiento demográfico, visto desde una óptica

malthusiana. Los observadores externos de la actualidad tienden a atribuirle esa irrupción socioambiental al notorio régimen de la primera república de Guinea (1958-84), bajo Sékou Touré, e imaginan un periodo colonial ambientalmente amigable, mientras que los nacionales tienden a mirar hacia el periodo precolonial para encontrar una sociedad y ambiente "buenos". Como para remarcar ese punto, algún académico forzó un edén socioambiental en ese periodo documentado por los geógrafos árabes del siglo XIII, i.e, un periodo por el que tenía simpatías morales (Zerouki, 1993).

Las ciencias sociales no tienen el monopolio de estas visiones socioambientales en las que el pasado forestal se ha convertido en un pasado moral. Son compartidas por muchos administradores locales y maestros de escuela, así como por consultores externos y académicos universitarios. La producción de la historia sirve a muchos fines. Lo que quedará claro es que los científicos sociales han sido cómplices en la creación de una visión de la historia como una tensión creciente desde un pasado armonioso. Al tratar este pasado como un modelo y un conjunto de objetivos para la resolución de las tensiones actuales, se han forjado vínculos entre las condiciones sociales y medioambientales de forma que contribuye al retiro del poco control sobre los recursos, que tienen quienes son los sujetos de estudio.

Caso 1: las islas de bosque de Kissidougou

La narrativa de la deforestación

Kissidougou se ve degradado. El paisaje es en su mayoría sabana, especialmente abierta en la temporada seca, cuando los incendios queman los pastizales y defolian los pocos árboles del paisaje. No obstante, asomándose entre la sabana, y rodeando y ocultando cada una de las aldeas de la prefectura, existen parches de inmensos bosques húmedos semicaducifolios. Los científicos y políticos consideran que estas "islas" de bosque y las tiras de bosques en galería en la orilla de los arroyos son reliquias de una cubierta de bosque húmedo densa y anteriormente mucho más extensa. Suponen que los habitantes han convertido a los bosques de manera progresiva en una sábana "derivada" por sus

prácticas de cultivo y quema, tras las cuales conservaron solo el cinturón de bosque alrededor de sus aldeas para proteger sus asentamientos del fuego y del viento, para dar sombra a cultivos arbóreos, para asistir con las fortificaciones y el ocultamiento y para brindar reclusión para actividades rituales secretas. Argumentan que el clima de hoy permitiría la existencia de una cobertura forestal genérica e infieren de la presencia de "reliquias" en forma de islas de bosque que alguna vez existió:

> En su origen, el bosque entre Kissidougou y Kankan era […] un bosque denso, húmedo, semicaducifolio. El detonante de la degradación es […] el sistema agrícola y la fragilidad del clima y el suelo en las regiones tropicales. Algunas formaciones primarias, sin embargo, persisten en forma de islas de bosque periféricas y bosques en galería en las riberas de cursos de agua. Estas islas de bosque evidencian la existencia de un denso bosque que hoy está reemplazado en gran medida por bosque secundario degradado. Están representadas todas las etapas de degradación: sabana boscosa, sabana de matorral y sabana de pastizales (Kan II, *Plan d'operation* 1992: 6-7).[2]

Se considera que la deforestación provoca problemas en varios niveles, lo que la vuelve una preocupación política urgente. En el ámbito local conduce a la degradación del suelo y torna menos productiva y sostenible a la agricultura. En el plano regional —la cuenca alta del río Níger— se piensa que la deforestación causó las irregularidades en el flujo del río en sus partes bajas y en los niveles de lluvia. Además, contribuye al calentamiento global. Es necesario actuar.

El análisis social siempre ha sido instrumental para explicar este problema y su reciente aceleración. A principios de siglo, el célebre botanista colonial francés Auguste Chevalier consideró que el aumento en el movimiento y el comercio durante el periodo posterior a la ocupación era la causa de un aumento en las quemas en comparación con el nivel anterior, menos dañino para el bosque (Chevalier, 1909). Él consideraba que los habitantes conservaban las islas de bosque por razones culturales, presuntamente en un mar donde representa la única excepción a la profana degradación (Chevalier, 1933). En 1948, Adam publicó la visión que domina en los archivos anteriores, según

2 Esta, al igual que todas las citas subsecuentes, ha sido traducida del francés original por los autores.

la cual los mandinka eran un pueblo de la "sabana" que había migrado al sur hacia la zona de los bosques y había creado una sábana ahí (Adam, 1948). En el proceso, se reporta que desplazaron al "pueblo de bosque" original, más benigno hacia ese recurso, más al sur y al interior de la zona de bosque.

En tiempos recientes, algunos científicos sociales profesionales se han enfocado en problemáticas ambientales en Kissidougou, a menudo pagados por programas ambientales financiados bilateral o internacionalmente. Un equipo responsable de la construcción de un programa de protección del río Niger financiado por la comunidad europea ilustra este enfoque de la siguiente manera:

> Nuestras preguntas buscaban explicar el deterioro del ambiente: erosión y empobrecimiento del suelo, la sequía de los recursos hídricos, el origen y la naturaleza de la destrucción del bosque, el origen del uso perverso de la quema de matorrales […] Paralelas a las causas físicas de la erosión del suelo, hay otras de naturaleza social, política y religiosa. Podemos suponer una fuerte relación entre la erosión del suelo, la degradación ambiental y el desmoronamiento y empobrecimiento de estructuras y relaciones socioeconómicas. La gestión ambiental está fuertemente vinculada con el estado de estructuras socioculturales […] Mientras más esté en equilibrio una comunidad a nivel de organización social, más sana será la naturaleza de su relación con el ambiente. Hay una relación dialéctica entre las instituciones sociales, políticas y religiosas y el equilibrio ecológico […] En estas comunidades […] la existencia de los seres vivos es justificada sobre todo por una gestión más o menos adecuada de lo que han dejado los ancestros. Esta gestión está registrada en la colección de leyes, concretas y abstractas, racionales e irracionales, que, una vez perturbadas por el exterior, pueden ser la causa de un deterioro que se manifiesta tanto al nivel de instituciones sociales, religiosas, políticas y económicas, como al nivel del ambiente (Programme d'Amanegement des Hautes Bassins du Fleuve Niger, n.d, 4-7).

En un segundo estudio dedicado a las quemas locales, el autor pretendía hacer un inventario de rasgos culturales en torno a la práctica de las quemas. "Hemos intentado rastrear la transición de una práctica tradicional a

una práctica 'moderna'. Nuestra hipótesis fue que el 'sistema social de los incendios' se instituyó como tal al destruir el 'sistema' anfitrión, el tradicional" (Zerouki, 1993: 1). En resumen, el autor alega que la "modernidad" es responsable de perturbar la integración de los incendios controlados que alguna vez tuvo éxito dentro de ciertas relaciones sociales, culturales y políticas intra e interaldeas. Sus descubrimientos son que "la degradación parece ser reciente" y que "se acelera con el desarrollo de una red urbana [...] y el crecimiento demográfico". El estudio propuso "soluciones a la disfunción social" (Zerouki, 1993). Un coinvestigador en este mismo estudio expande el análisis de las causas de dicha "disfunción":

> Según una indagación, por un lado, de los ancianos [...] y por el otro de IFAN en 1968, la región entera estaba cubierta de bosque hace alrededor de 99 años, en lo que corresponde al periodo de Samory Touré. Los caudillos usaban el fuego para sus campamentos y para tener mayor visibilidad. La introducción de la locomotora durante el periodo colonial tuvo un impacto considerable en la vegetación. Desde la independencia, se ha producido una desmitificación de los bosques y de las islas alguna vez consideradas lugares de culto, se han instalado aserraderos y se ha establecido la elaboración de ladrillos. La agricultura y el pastoreo nómadas, las quemas de matorrales no controladas, los incendios forestales y una demografía descontrolada agravan los procesos ya iniciados de degradación de la vegetación (Fofana *et al*., 1993: 49).

Otros abordajes de expertos se han valido del análisis social convencional para afirmar una vez más que los kurankos (quienes hablan un dialecto mandinka) son un pueblo de sabana y trajeron las prácticas de quema de matorrales consigo cuando desplazaron a los kissis más al sur. "Como pueblos del bosque, los kissis no son tan descuidados con el fuego como los pueblos de sabana" (Green, 1991: 20). De una manera típicamente racista, la responsabilidad de la degradación se diluye en la ambigüedad entre cultura y origen.

Un estudio de un área que está justo del otro lado de la frontera este de Kissidougou, si bien es algo cínico respecto al modelo de crisis del análisis ambiental, afirma que:

> [L]a degradación de los bosques —siempre tildada de "explosiva"— ha continuado de forma acelerada […] La explotación campesina se puede identificar correctamente como el principal factor de la destrucción, pero en general las medidas que se toman [desde los tiempos coloniales] solo han tratado los síntomas. Los motivos sociales para el uso del fuego en la caza […] están estrechamente vinculados a la creciente tendencia de comercialización y monetización en el ámbito rural. Esto subyace a la pérdida de la importancia de organizaciones tradicionales de cazadores quienes, hasta la fecha, están marcados por un carácter anticomercial. [Las pasturas quedarán amenazadas por] la creciente migración de pastores a la región, una consecuencia de la degradación de las pasturas en las regiones tradicionales de pastoreo (e.g., Fouta Djallon). Las estructuras tradicionales que regulan la explotación de los recursos naturales, a menudo preislámicas en su origen, incorporan una serie de aspectos de conservación. Algunas siguen operando […] pero se empieza a ver un cambio: un proceso de cambio social que implica una disolución de las estructuras reguladoras tradicionales que no se pueden reconciliar fácilmente con las tendencias al comercio que son cada vez más marcadas en la región (Stieglitz, 1990: 54, 70, 77).

La autora, quien considera que el islam perturbó esta tradición "preislámica", agrega más argumentos agrodemográficos a su mezcolanza explicativa:

> Cuando el periodo de cultivo es demasiado prolongado o el periodo inactivo demasiado corto, hay demasiada pérdida en materiales nutritivos, lo cual conduce finalmente a una degradación irrevocable de los suelos. El periodo inactivo se limita entre cinco y diez años. Se ve una tendencia hacia la escasez de la tierra (Stieglitz, 1990: 71).

Esta es la postura respecto al cambio demográfico que sostienen la mayoría de los analistas. Ponsart-Dureau, por ejemplo, un alumno de Agronomía que asesoraba un proyecto cercano, considera que

> [a]lrededor de 1945, el bosque, según los ancianos, llegaba a su límite 30 km al norte del pueblo de Kissidougou. El día de hoy, su límite norte se encuentra al nivel de Gueckedou-Macenta, habiéndose retraído alrededor de 100 km.

> El crecimiento demográfico obliga a los aldeanos a explotar su tierra completamente y a practicar una deforestación que desequilibra el medio natural (Ponsart-Dureau, 1986: 9-10 y 60).

Por consiguiente, de diferente manera, cada uno de estos análisis contribuye a una narrativa que ahora es tan prominente tanto en la educación y en los círculos administrativos de Kissidougou como en los análisis sociales. Alguna vez Kissidougou tuvo una extensa cubierta de bosque, mantenida por densidades poblacionales bajas y un orden social funcional cuyas regulaciones controlaban y limitaban el uso inherentemente degradante que la gente hacía de la tierra y la vegetación. El desmoronamiento de un manejo tan organizado de los recursos por presiones internas y externas, combinado con el crecimiento demográfico, ha llevado a una deforestación en apariencia tan evidente en el paisaje de hoy. De forma invariable, los observadores consideran que la degradación es un problema reciente, continuo y cada vez más grave. Los cambios sociales y económicos, como la "demografía descontrolada", son siempre considerados como algo que se acelera partiendo de un "punto cero" (el arquetipo de "tradición", tan valioso para los antropólogos sociales malinowskianos y el objeto de descripción en etnografías antiguas). Se evoca una multitud de indicadores para apoyar ideas sobre la degradación reciente y continua, como un declive en la caída de lluvia desde mediados de la década de los cincuenta, la sequía de ciertos recursos de agua y más.

De las suposiciones contenidas y estabilizadas por esta narrativa, por lógica, han derivado implicaciones políticas que han cambiado poco desde su primera elaboración a principios del periodo colonial. El primer énfasis de las políticas pblicas se da en la reducción de la agricultura en tierras altas —vista como inherentemente degradante del bosque y el suelo, y más aún ante un mayor grado de individualismo y crecimiento poblacional— a favor de la agricultura en los pantanos. Cualquier uso de las tierras altas que pueda permanecer debe ser racionado e intensificado (e.g., por medio de sistemas agroforestales "modelo", la reorganización de la tenencia y los sistemas de barbechos). En segundo lugar, las políticas se han enfocado en el control de quemas de matorrales mediante prohibiciones, regulaciones y

prácticas impuestas externamente (e.g., quema temprana). En tercer lugar, ha habido políticas que intentan controlar la deforestación tanto mediante la prohibición de la tala de una lista de especies de árbol protegidas (en gran medida las especies de árbol con valor comercial para la leña y más representativos de la cubierta de bosque "original") como por la creación de reservas de ciertos parches de bosque. En cuarto lugar, ha habido intentos de reconstitución del bosque por medio de la siembra de árboles en territorios aldeanos. El elemento común de estas políticas es recurrir a "paquetes" tecnológicos bien establecidos en la región, como el desarrollo en valles pantanosos tierra adentro y la plantación de árboles provenientes de viveros; aunque los cambios en la filosofía del desarrollo han traído transformaciones en los niveles que se consideran apropiados. Por ende, en el periodo colonial y en el de la primera república de Guinea, la narrativa de la degradación justificaba que se le quitara el "control" sobre los recursos a los aldeanos (disfuncionales, incapaces) a favor del Estado. En las políticas de quema de matorrales, uso de tierras altas, tala para leña y reservas de bosques, las administraciones gubernamentales tomaron el control de la tenencia de los recursos y regularon el uso local por medio de permisos, multas y, en ocasiones, represión militar. En épocas recientes, ha cambiado el énfasis hacia reparar, reconstruir o reemplazar el control comunitario sobre los recursos, que se ha roto: enfoques desde la "gestión de *terroir villageois*" brindan un contexto para la planeación —en la aldea— de las quemas de matorrales, el uso del bosque y de tierras altas, la siembra "participativa" de árboles y la reserva de islas de bosque a favor de "la comunidad".

La contra narrativa

Observar cómo ha cambiado en realidad la vegetación en el Kissidougou es un primer paso necesario para evaluar estos análisis desde las ciencias sociales. Por fortuna, existe una cantidad de fuentes de datos históricos que lo posibilitan —fuentes ignoradas o descartadas por analistas sociales que estaban convencidos de la degradación que estaban explicando—.[3] Existen fotografías

3 Más detalles del siguiente análisis histórico de la vegetación aparecen en Leach y Fairhead (1994).

aéreas de Kissidougou que muestran con claridad el estado de la vegetación en 1952-53. Estas brindan evidencia incontrovertible de que, durante este periodo reciente —se supone que el más degradante— el patrón de vegetación y el área del bosque y la sabana en realidad se han mantenido relativamente estables. Los cambios que han ocurrido no involucran pérdida del bosque; en cambio, hay grandes áreas donde la cubierta del bosque ha aumentado y donde la sabana se ha vuelto más, no menos, boscosa. Se han formado y han crecido islas de bosque, y en muchas áreas las sabanas evidentes en la década de los cincuenta han cedido a una vegetación de bosque secundario.

Para examinar el cambio en la vegetación desde mucho antes, revisamos descripciones y mapas del paisaje de Kissidougou realizados durante los inicios de la ocupación militar francesa (a grandes rasgos, entre 1890 y 1910), así como indicadores de la vegetación anterior que surgen de la historia oral y de recuentos de la vida cotidiana en la juventud de quienes hoy son los ancianos del pueblo. Estos recursos evidencian que lo que fue cierto para 1952-94 es igualmente cierto para 1893-1952. Asimismo, los aldeanos sugieren, muy al contrario de las interpretaciones de las políticas, que ellos establecieron las islas de bosque alrededor de sus asentamientos y que su trabajo es el que alienta la formación de la vegetación de bosque secundario en la sabana. En 27 de los 38 pueblos que investigamos, los ancianos relataron cómo sus ancestros habían fundado los asentamientos en la sabana y alentado el crecimiento gradual de bosques a su alrededor.

Fuentes documentales más tempranas de entre 1780 a 1860 no dan indicios de una extensa cubierta de bosque; de hecho, sugieren lo contrario. Tanto Harrison, cuando viajó a las zonas Kissi (c. 1780, véase Hair, 1962), como Seymour (1859/60) en tierras toma, al sudeste de Kissi, describen sabanas de pastizales cortos y una absoluta escasez de árboles en lugares que ahora sostienen extensos y densos bosques húmedos. Sims (1859/60), refiriéndose al área justo al sudeste (entre Beyla y Kerouane), escribe que "no hay árboles; todo el país es una pradera; la gente debe sustituir la leña por estiércol de vaca y un tipo de musgo que crece en abundancia en esa región". Muchas series de datos de la historia oral temprana apoyan esta imagen de menor, no mayor, cubierta de bosque en el siglo XIX. Todas las aldeas que declaran su fundación en la sabana fueron establecidas durante el siglo XIX o antes.

Varias historias fundacionales de aldeas en el sur se refieren a conflictos desatados por la escasez de madera para construir, algo que parece extraño dada la actual vegetación de bosque y matorral, y en ciertas zonas se dice que los pastos de sabana se transformaron de los asociados a climas más secos a los asociados a climas más húmedos.

Parece, entonces, que los análisis en Kissidougou desde las ciencias sociales han estado brindando explicaciones para la pérdida de un bosque que en realidad no ha estado sucediendo. Al hacerlo, han apoyado una narrativa de cambio en la vegetación que se contradice con los "hechos" ambientales más comprobables —que inclusive representan una realidad totalmente opuesta—. Esto conduce a que interroguemos la relación entre sociedad, demografía y ambiente que se valora en estos análisis. Como sugerimos ahora, hay otras maneras de concebir esta relación —*contranarrativas*, si se permite el término— que encajan con la historia demostrable de la vegetación y la explican mejor.[4]

La primera reconceptualización implica reconocer que el uso local de la tierra puede tanto enriquecer la vegetación como degradarla. Puede servir (y a menudo sirve) para aumentar la proporción de formas útiles de vegetación y especies en el paisaje según los valores locales y los criterios de productividad prevalecientes. Esto a menudo ha significado un aumento en la preponderancia de formas de bosque en un paisaje que alguna vez fue más de sabana. Por consiguiente, los aldeanos han alentado, por ejemplo, la formación de islas de bosque alrededor de sus aldeas para obtener protección, un refugio conveniente para sus cultivos de árboles y fuentes de productos de recolección, así para lograr el ocultamiento de actividades rituales. Esto lo han logrado tanto por medio del uso cotidiano de la tierra en los márgenes de la aldea (por ejemplo, con la recolección de pasto para cercas y el pastoreo de ganado que reducen los pastizales inflamables, y con la sedimentación de residuos del hogar que fertiliza la sucesión del bosque que comienza a desarrollarse) como por medio de técnicas aplicadas de forma deliberada (como la siembra de árboles

4 El análisis alternativo desde las ciencias sociales de este tipo y su considerable evidencia está completamente documentado en otros sitios (Fairhead y Leach, próximo a publicación; Leach y Fairhead, 1995).

iniciadores de bosque y el cultivo de los márgenes para crear condiciones de suelo propicias para el establecimiento de árboles).

Además, en las pendientes y mesetas entre las islas de bosque, la agricultura local y las prácticas del uso de quemas tienden a conservar la cubierta de bosque existente y a fortificar los suelos y la vegetación de condiciones de sabana a condiciones de bosque. Mucha de la agricultura se concentra en tierras que los campesinos han mejorado, ya sea por alteraciones en la calidad edáfica mediante el asentamiento a largo plazo, la jardinería o un cultivo parecido a la jardinería; o por medio de mejoras a corto plazo en periodos de descanso de la tierra con pastoreo de ganado, protección de fuentes de semillas, multiplicación de árboles de sabana desde retoños o distribución de enredaderas iniciadoras de bosques. Estas formas de conocimiento y prácticas se encuentran entre todos los grupos etnolingüísticos de Kissidougou. No parece haber mucho fundamento para distinguir entre los pueblos del "bosque" y los de la "sabana".

Una reconceptualización parecida tiene que ver con el carácter de la "organización" para la gestión de los recursos naturales. La gestión ambiental en esta región parece depender —y siempre ha dependido— menos de las autoridades y organizaciones socioculturales en el ámbito comunitario (que pueden estar "amenazadas" por el cambio social), que de la suma de una serie de relaciones mucho más difusas; una constelación más que una estructura. De hecho, el mantenimiento de la productividad a largo plazo está integrado en muchos casos a los patrones de producción a corto plazo; ya sea para uno mismo, para el hogar o para el campamento, estas mejoras a menudo interactúan con otras —espacial o temporalmente— para que el efecto conjunto en el enriquecimiento de los recursos sea mayor que la suma de sus partes. Por tanto, las quemas realizadas a principios y a mitad de la temporada seca por parte de los cazadores para despejar pequeñas zonas de cacería, y por parte de otros para proteger la propiedad y los barbechos, crean barreras para los incendios más devastadores que vienen después; y los pequeños cultivos de árboles que siembra la gente y que protege detrás de sus jardines en la cocina contribuyen a la creación de la isla de bosque de la aldea. Para mucha de la "gestión de recursos" no hay necesidad de estructuras en la aldea o más arriba para "regular las

presiones degradantes". No obstante, las autoridades de la aldea sí intervienen en ciertas actividades que influyen en la vegetación —e.g., en la gestión de la quema preventiva alrededor de la aldea, en la protección de árboles de palma, en la imposición de fechas para amarrar el ganado y en la coordinación con la rotación de barbechos de las parcelas contiguas de los campesinos en algunas zonas de Kissi—. Las organizaciones de aldea y más arriba también ejercen control sobre factores externos que influyen en el ambiente agrícola, como negociar con posibles usuarios pastorales fula (Peuhl) o representantes del servicio forestal.

En este contexto, el cambio socioeconómico se ha articulado en forma de cambios en las prioridades de enriquecimiento del paisaje y en la composición de una constelación continua de gestión de recursos. Los aldeanos, por ejemplo, han adaptado la calidad de la isla del bosque en función de las condiciones socioeconómicas cambiantes y las señales comerciales —gestionándolas como fortalezas durante los enfrentamientos precoloniales, extendiéndolas para la siembra de café cuando esta se volvió lucrativa, y abandonando el café a favor de los árboles frutales y el enriquecimiento de productos para la recolección cuando los precios volvieron a caer—. Las oportunidades de empleo urbano, la migración juvenil y un aumento en las oportunidades económicas individuales han contribuido a cambios en la organización campesina, pero los hogares agrícolas más pequeños de hoy usan y mejoran las tierras de barbecho como antaño lo hacían las mayores familias extensas, y la producción comercial individualizada de comida de las mujeres modernas se concentra en formas de cultivo de las tierras altas que mejoran los suelos y la vegetación (Leach y Fairhead, 1995). Las autoridades de la aldea han jugado un papel continuo si bien cambiante dentro de esta constelación de gestión diversa e históricamente flexible. Se han dado muchos cambios sociales y económicos, y hay muchos problemas sociales y económicos nuevos, pero estos cambios se vuelven visibles en el paisaje en gran medida por el uso de la tierra y las prioridades de gestión cambiantes, no por un "desmoronamiento" en la organización ni la degradación de la vegetación.

La explicación de un cambio demostrable en la vegetación también sugiere una relación entre el cambio demográfico y ambiental muy distinta

a la relación "crecimiento demográfico rápido-deforestación" sostenida por la narrativa de las políticas públicas. A pesar de los problemas que implica reconstruir las poblaciones precoloniales, la evidencia no apoya en definitiva la idea de un crecimiento demográfico dramático, ni siquiera de un aumento unilateral constante. La comparación de datos de censos sugiere que la población rural de Kissidougou solo ha aumentado 70% desde 1917. Los focos de crecimiento se han concentrado alrededor del pueblo de Kissidougou y en los mayores ejes viarios, y en muchas áreas la población casi se ha estancado. La evidencia precolonial sugiere que ciertas áreas tenían poblaciones campesinas significativamente mayores a principios del siglo XIX que el día de hoy y que sufrieron una despoblación radical durante las guerras a finales del siglo XIX. De hecho, los recuentos orales, los reportes de exploradores, algunos documentos antiguos de los siglos XVI al XVIII que mencionan la región, así como la historia regional más amplia y la arqueología, sugieren que Kissidougou tuvo poblaciones campesinas considerables desde el siglo XVI y mucho antes. Claramente hay tan poca evidencia para un aumento dramático en la población en el siglo actual comparada con un estándar precolonial bajo, como la hay para una pérdida dramática de bosque.

En este contexto, se podría suponer una relación entre la tendencia al aumento del bosque de Kissidougou y el estancamiento o declive en la población. Sin embargo, este argumento invertido aún depende de la suposición de que el uso de la tierra local tiende a convertir los bosques y barbechos de bosque en sabana y que, por tanto, más personas significan mayor pérdida del bosque. Hay una contranarrativa que encaja mejor con la evidencia de las prácticas locales del uso de la tierra y con la historia de la vegetación: a partir de una situación previa de sabana de mayor extensión, ha existido una relación ampliamente positiva entre la población de esta región y su cubierta de bosque. Primero, a medida que los asentamientos se asocian con la formación de islas de bosque, más aldeas significan más islas de bosque. Esta relación se ha modificado por cambios en los patrones de distribución y asentamiento, con una mayor multiplicación de asentamientos e islas de bosque durante el siglo XIX, cuando el asentamiento disperso era una estrategia de sobrevivencia, que,

en el siglo XX, cuando se expandieron los asentamientos existentes para acomodar a poblaciones en aumento y, desde luego, también algunos se consolidaron por despoblación. Con todo, los asentamientos nuevos y la formación de bosque han estado más vinculados, en tiempos recientes, al movimiento de la ubicación de las aldeas. En segundo lugar, una mayor densidad de población ayuda al control de las quemas, al brindar la mano de obra necesaria y al crear la demanda, lo que llena al paisaje de más lugares (barbechos mejorados, plantaciones, sitios de asentamiento) que las personas deben proteger. En ciertos casos, la densidad de ciertas áreas protegidas con vegetación más densa permite con mayor facilidad la total exclusión del fuego del territorio. Los distritos, donde en tiempos recientes las sabanas de las tierras altas han cedido a la vegetación densa de los barbechos de bosque, se correlacionan ampliamente con las zonas donde ha aumentado la población. En contraste, las densidades poblacionales bajas imposibilitan la prevención de incendios y son un factor clave en la persistencia de incendios sueltos en el norte y de las peculiares estrategias de manejo de "vivir con el incendio" que ahí se acostumbran.

Una visión de las relaciones entre lo humano y el ambiente en términos de enriquecimiento por medio de una constelación diversa de manejo de recursos que responde a incentivos cambiantes explica mejor (brinda una contranarrativa que encaja mejor) la historia demostrable de la población y la vegetación. Las políticas concebidas dentro de la narrativa de la degradación ocasionalmente han menospreciado estas relaciones, así como han creado más problemas generales para los aldeanos. Al eliminar el control local sobre los recursos, han llegado a interferir con la gestión local de estos. En el norte, por ejemplo, el control externo de las quemas y la prohibición impidieron que los aldeanos aplicaran sus estrategias secuenciadas de manejo-a través-del uso,[5] lo que forzó estrategias clandestinas de mitigación y volvió más difícil la protección de la aldea y los cultivos. La eliminación de la tenencia local de los recursos ha reducido la capacidad de los aldeanos de beneficiarse de actividades previas de enriquecimiento (e.g., al vender los árboles de sus islas de bosque

5 Para leer más sobre el continuo gestión-uso (i.e. la manera en la que las personas usan un recurso por la forma que lo gestionan), véase Roe y Fortmann (1982).

para leña) y de sus incentivos para continuar enriqueciendo el paisaje. La aplicación de políticas ambientales represivas en efecto ha castigado a las poblaciones rurales por actividades supuestamente dañinas que, en realidad, son benignas o benéficas. Acercamientos más recientes, que se enfocan en la descentralización del control de los recursos al fomentar una organización y planes de gestión en la aldea, en realidad, corren el riesgo de menospreciar la constelación existente, flexible y diversa de relaciones de gestión de recursos. Cuando son iniciados por agencias estatales con considerable apoyo del extranjero y una presencia e ideas predefinidas sobre las dinámicas ambientales, la verdadera descentralización puede ser debilitada. Por último, pero no menos importante, la inversión en la "corrección" de la supuesta degradación ambiental de Kissidougou, una inversión que llega a niveles nunca antes vistos entre las preocupaciones actuales de los donantes de ayuda humanitaria, conlleva costos de oportunidad grandes en términos de otros problemas de desarrollo rural más apremiantes que no se llegan a abordar.

La historia de la vegetación y su contranarrativa de enriquecimiento del paisaje conlleva distintas implicaciones para las políticas, que ponen énfasis en el apoyo a las prácticas locales probadas y determinantes para el cambio. Claramente hay muchas técnicas para el uso de la tierra que sirven para aumentar la cubierta del bosque y que podrían brindar una base efectiva para el apoyo que viene del exterior. Al trabajar con la ecología local de quemas, suelos, sucesiones de vegetación y dinámicas animales, estas prácticas "integradas de gestión de la vegetación" son más apropiadas para la localidad, están más vinculadas con la matriz social y, por tanto, son más efectivas en términos de costo de mano de obra que los "paquetes" forestales que por lo general proponen las agencias externas. Dado que la agricultura en la región no se está degradando de forma inevitable, la política ambiental podría buscar apoyar además de "racionar y regular" la agricultura, en especial para apoyar esas prácticas agrícolas de tierras altas que mejoran los suelos y la vegetación de los barbechos, en vez de concentrar el esfuerzo técnico exclusivamente en marjales. De manera fundamental, en vez de aumentar la intervención externa en la organización de la gestión de los recursos dentro de las aldeas, la prioridad más

importante es crear políticas conducentes, así como condiciones socioeconómicas que permitan actuar con eficacia a las constelaciones locales de gestión de recursos. Esto implica un giro por parte de las agencias ambientales lejos de la dirección (por medio de la represión o la reestructuración organizativa como en el "control comunitario" asistido) hacia el apoyo y el reconocimiento de las diversas instituciones que en realidad se involucran en la gestión de los recursos y hacia un papel más sensible en el que se brinden servicios solicitados para la aldea.

Caso 2: la reserva de bosque de ziama

La narrativa de deforestación

Al viajar al sur desde Kissidougou, se llega a la región boscosa alta de Guinea. Al interior de Guinea hay una región poblada y sólo dos bloques significativos de bosque intacto, de los cuales el que está más al norte es Ziama.[6] Abarcando un área de 120 000 hectáreas, Ziama fue designada como reserva colonial de bosque en 1932, convertida en una reserva de la biósfera internacional dentro del programa "El hombre y la biósfera" en 1980 y ahora es sujeta de un gran proyecto de conservación financiado por el Banco Mundial. Las narrativas políticas relativas a Ziama reproducen las de Kissidougou a un grado significativo, con una excepción principal de escala: están en juego los cambios en el estatus de un bloque grande de bosque y la preocupación por la conservación es en parte global.

Se considera que el bosque Ziama se halla bajo amenaza considerable como reliquia de una cubierta de bosque que alguna vez fue mucho mayor. Como indica la Tabla 1, tomada de un reporte de la IUCN sobre Ziama, la cubierta de bosque en esta parte de Guinea ahora es solo 20% de lo que fue "en su origen", y el reporte subraya que el bosque retrocede rápido. Además de la pérdida en biodiversidad (una preocupación considerable en el contexto internacional), se dice que esta reducción causa una desecación del clima local y regional, evidente en las fuentes y corrientes de agua

6 Más detalles sobre este caso aparecen en Fairhead y Leach (1994).

más secos, lo que contribuye a la pérdida del bosque en un ciclo vicioso que amenaza la agricultura regional.

Tabla 1. Área de bosque húmedo en el Bosque de Guinea en diferentes momentos.

Periodo	Área (hectáreas)
Origen	1,930,000
c. 1958	1,300,000
c. 1980	1,075,000
1986	397,000

Fuente: République de Guinée (1990).

Los estudios regionales y las percepciones administrativas se basan en análisis sociales de esta deforestación y de la invasión de lo que queda de la reserva Ziama. La versión más detallada y explícita del "análisis" se encuentra en un estudio socioeconómico comisionado por un proyecto de conservación (Baum y Weimer, 1992). Las suposiciones que sostiene son estabilizadas por una narrativa no muy distinta a la de Kissidougou, que involucra poblaciones crecientes de campesinos migrantes e indígenas que han perdido sus valores y formas de organización "tradicionales" y que buscan y talan las zonas de bosque.

Como en Kissidougou, se dibuja un fuerte contraste entre los pueblos del bosque, los indígenas toma (loma) y la gente de la sabana, en este caso los konianke (mandinka), cuya migración y modos de sabana amenazan al bosque. Por tanto, leemos de los toma que están "en gran medida centrados en sus concepciones desde sus costumbres y modo de vida habitual" (Baum y Weimer, 1992). Los autores explican de los toma que "la evolución social e histórica como pueblo en un ambiente de bosque [...] favorece una tendencia a la contemplación y la sobriedad". Estas actitudes apoyaron un estilo de vida y una sociedad tradicional que existieron en armonía con

el bosque. La situación geográfica periférica de los toma, en términos de comunicación y por el tipo de economía pasada casi libre de comercio, apoyaron estas tendencias, dice el argumento.

No obstante, se afirma que los toma han perdido sus modos del bosque: "[…] el bosque en gran medida ha perdido su tradicional importancia, a favor de un uso esencialmente agrícola del espacio. Esto evidencia, sin duda, cambios profundos en la orientación económica, especialmente entre los toma, cazadores y recolectores antiguos" (Baum y Weimer, 1992). Los autores se sorprenden al descubrir que las mujeres manejan el principal cultivo, el arroz, y esto les sirve para reforzar la idea de que los toma apenas aprendieron la agricultura hace poco; "refleja, sin duda, la experiencia agrícola histórica de los cultivos migratorios, en zonas pequeñas, solo parcialmente despejadas". Esta visión retoma percepciones coloniales de que los toma "tenían una agricultura muy primitiva, bastante anárquica, centrada en el arroz pluvial basado en la limpieza de áreas de bosque […] Los del norte prácticamente han destruido la cubierta de árboles, los del sur, en los valles y penillanuras, siguen aplastados por el bosque" (Portères, 1965: 668 y 726).

Los cambios en la economía agrícola toma están ligados a la apertura de la zona al comercio y a los mercados, y a la necesidad de alimentar poblaciones crecientes. Ambas tendencias se ligan asimismo a la migración y la influencia de pueblos mandinka del norte —migración que también es central para explicar la evolución demográfica de la zona—. Los autores presentan una imagen de un poblamiento a largo plazo, muy gradual, de la región Ziama a causa de la migración de los toma, y luego cambios bruscos a medida que los mandinka empezaron a migrar, ahora representados por migrantes de segunda o tercera generación. Se dice que había dos aldeas presentes en la reserva cuando fue designada en 1932, Boo y Kpanya, con 542 y 370 personas en aquel momento. Boo, que ahora tiene una población de alrededor de 1 600, se supone que tuvo una población de 500 cuando se fundó, lo cual da la impresión de que, si bien el bosque podría haber sido poco habitado durante periodos largos por los pueblos del bosque, solo desde mediados del siglo XIX ha estado bajo una amenaza en constante aumento. Se reporta que la migración hacia la región ha aumentado de

cuatro a siete veces en los últimos sesenta años. Se ha observado cómo este rápido crecimiento demográfico ha creado una presión severa sobre la tierra en las zonas vecinas de la reserva. Se emplean suposiciones sobre la capacidad límite de los cultivos migratorios para argumentar que las tasas población-tierra se encuentran ahora "completamente saturadas", y que a esto se le debe en gran medida la invasión de la reserva por parte de campesinos para cultivar.

Esta narrativa —respecto al último bloque de bosque natural "prístino" que queda, amenazado por cambios socioeconómicos recientes y la presión de la población— representa una potente justificación para la conservación. También conlleva directivas para las políticas de conservación. Un bosque "original" es definido fácilmente como una herencia global o regional, y su conservación por parte de guardianes globales y regionales es un imperativo moral. La narrativa permite que las administraciones enumeren los problemas de deforestación que afectan el clima y el agua como si nunca hubieran ocurrido antes y para justificar la urgencia de la conservación con argumentos sobre la irreversibilidad. En acercamientos anteriores, derivados de la colonia, la reserva de dicho bosque, a menudo como dominio del Estado, era aceptablemente justificada con poca consideración por los intereses locales en el uso de la tierra y los recursos de la reserva. En Ziama, como en otros lugares, los acercamientos de "vigilancia y patrullaje" caracterizaron la conservación temprana de bosques. En tiempos recientes se ha puesto énfasis en la necesidad de obtener la participación, aceptación y apoyo de las poblaciones locales para que la conservación sea sostenible. Dado que la resistencia a la reserva y la falta de respeto de la población local hacia ella se entienden en términos de escasez de tierras y presión económica, se deduce que las políticas deben fomentar el desarrollo socioeconómico y la intensificación agrícola en la zona marginal alrededor del bosque, junto con las restricciones a la tenencia de la tierra que sean necesarias, para reducir las presiones actuales y futuras sobre la reserva.

La contranarrativa

De nuevo, el examen de datos históricos que muestran cómo han cambiado la vegetación, la población y la sociedad en esta región revela hasta qué grado las suposiciones estabilizadas por esta narrativa se encuentran mal fundamentadas. En el caso de Ziama, hay descripciones detalladas que provienen de escritos publicados de varios liberiano-americanos que visitaron lo que hoy es la reserva de bosque a mediados del siglo XIX (Anderson, 1870; Star, 1912; Seymour, 1859/60). Lo que vieron y describieron de ninguna manera refleja la imagen preponderante de poblaciones dispersas de cazadores-recolectores toma viviendo en armonía con un bosque alto aislado. Las dos aldeas "enclave", ahora situadas dentro de los bosques que cubren el ancho llano del río Diani, en aquel entonces se encontraban en medio de sabanas. El macizo de la montaña Ziama, ahora considerada el corazón del bosque primario, consistía en roca desnuda o cubierta "con pasto de caña y casi ningún árbol con excepción de la palma" (Seymour, 1859; 1860). Desde la cima del macizo, Seymour describe el llano como "cubierto de pequeños matorrales y pastos, y le da al país la apariencia de una vieja granja, con palmeras dispersas por todas partes". La denominación identitaria del siglo XIX de "pueblo de bosque", además de lo cuestionable que es en sí misma, parece muy inapropiada para estos toma de la sabana de Ziama.

Todos los recuentos coinciden en que la región tenía grandes poblaciones, significativamente más grandes, no más pequeñas, que las de hoy. Por tanto, tomando las aldeas enclave como ejemplo, Anderson (en 1874) consideró que Kpanya era "muy grande" (cuando su recuento describe 2 500 personas como pequeño) y Seymour (1859; 1860) calculó que Boo tenía 3 600 habitantes. Además, como describen los ancianos de las aldeas, estas aldeas grandes contaban con muchos pequeños asentamientos dependientes que ya no existen. La región era sobre todo agrícola. Seymour y Anderson describen grandes granjas de sabana de arroz, maíz y yuca hasta donde alcanzaba la mirada, y los barbechos cortos necesarios para sostener grandes poblaciones. También fue próspera en lo comercial. Seymour observó cincuenta telares y cinco herreros en Boo y encontró mujeres usando joyería con un valor de $20-30 en aquel entonces. Un poco más al norte, en Kuankan, las personas caminaban varios kilómetros de

las montañas al llano para vender leña. Como observa Seymour, "la leña es escasa en esta gran ciudad, pero tienen un buen mercado, y cualquiera haría bien en ver la actividad de los niños, los principales comerciantes en esta línea". Ambos asentamientos enclave tenían mercados diarios y semanales, así como todos los pueblos grandes, a unos ocho o diez kilómetros de distancia uno del otro, donde se intercambiaban alimentos, ganado, cultivos comerciales (como el algodón y la nuez de kola), y bienes artesanales de todo tipo. La región no era marginal económica ni geográficamente, sino central en rutas comerciales entre el bosque y la sabana establecidas desde mucho tiempo atrás.

Por ende, a mediados del siglo XIX, la región Ziama claramente no encajaba con las imágenes que las narrativas políticas de hoy construyeron para ella. No es sorprendente, entonces, que su historia subsecuente también contradiga la imagen de la narrativa convencional de un aumento demográfico unilineal y la destrucción del bosque. En cambio, la historia que explica cómo esta región se convirtió en una reserva de "bosque primario" después de solo 130 años de estar altamente poblada, gira en torno a las guerras que afectaron la zona entre 1870 y 1910 (Fairhead y Leach, 1994). El conflicto militar sostenido, primero con grupos mandinka y luego con los colonos franceses, provocó una enorme despoblación y devastación económica. Fue esto, no la persistencia de densidades de población precoloniales que se habían mantenido bajas, lo que explica las poblaciones dispersas en la región durante el cambio de siglo. En los asentamientos, campos y barbechos abandonados, creció el bosque. Para 1932, la administración franco-colonial reconoció el bosque secundario como digno de conservación. El rápido crecimiento del bosque apoya la idea de que la agricultura intensiva temprana y el manejo de la sabana no causaron un daño irreversible en el potencial de la vegetación del bosque; de hecho, podría evidenciar el legado positivo de las anteriores prácticas de manejo locales, como en Kissidougou. Para inicios de la década de los ochenta, los conservacionistas no estaban logrando distinguir el recrecimiento del bosque de Ziama del bosque primario. Las poblaciones desde 1932 no han crecido en 400-700% como sugiere el estudio socioeconómico. Utilizando las estadísticas propias del estudio, en las 41 aldeas alrededor de la reserva, las poblaciones han crecido solo 80%

desde 1932, o 120% si se consideran los influjos recientes de refugiados liberianos y de Sierra Leona.

Queda claro que las suposiciones estabilizadas que los investigadores de ciencias sociales emplean para entender la naturaleza de las interacciones entre los humanos y el ambiente y sus cambios en Ziama están en abierta contradicción con una narrativa más comprobable centrada en los conflictos armados, la despoblación, la regeneración del bosque y la alienación de la tierra. La segunda narrativa engloba mejor la experiencia y la actitud de los habitantes toma actuales, cuyo despliegue prominente en las casas de la aldea de retratos de ancestros que fueron asesinados o que huyeron durante las guerras demuestran que estos sucesos no se han olvidado. Es en gran medida este desajuste de narrativas lo que subyace en el fracaso de la administración de la reserva para forjar alguna relación constructiva con los habitantes locales. Por el contrario, su relación es tensa y en ocasiones ha estallado en violencia. Las actividades de desarrollo alrededor de la reserva han parecido inadecuadas para calmar este conflicto y prevenir la "invasión" de las tierras en su interior. Lograr la conservación sostenible, en especial una conservación participativa, sigue siendo una meta lejana y poco probable, y se ha desperdiciado mucha inversión en el esfuerzo.

Cuando los habitantes de hoy "invaden", están intentando reclamar tierras ancestrales y a la vez restablecer el control sobre un antiguo dominio alguna vez poblado y próspero, ahora alineado políticamente con ellos. Este reconocimiento sugiere orientaciones alternativas, en potencia más fructíferas, para políticas públicas. Si quienes toman las decisiones se van a involucrar sensible y productivamente con las comunidades locales, entonces las experiencias históricas de los habitantes locales deben ser incorporadas a los diálogos y negociaciones políticas. Asimismo, la reivindicación de tierras y autoridad política con fundamento histórico debe ser reconocida y abordada con seriedad mediante acuerdos de conservación que, por ejemplo, cedan el control de la tenencia a terratenientes locales, dentro del contexto de acuerdos de arrendamiento o manejo que reconozcan por completo el valor que sus tierras tienen para otros.

La narrativa regional y su alternativa

Las narrativas particulares sobre el cambio en la vegetación y las causas sociales que se usan para apoyar políticas en Kissidougou y Ziama son ejemplos de una narrativa más amplia. Esta narrativa más amplia contiene y estabiliza suposiciones que han sido aplicadas en casos específicos, pero que también están integradas en documentos de políticas nacionales, regionales e internacionales.

Por tanto, se lamentó en papeles incorporados a la estrategia política de desarrollo agrícola de Guinea que "el norte del bosque Guinea (Beyla, Kissidougou y Gueckedou) ya no es una región pre-bosque, ¡sino una región 'ex bosque' o 'post bosque'!". Haciendo un resumen de la narrativa en su forma más pura y concisa, se declaró:

> Esta degradación del ambiente natural […] Es el resultado de la evolución de sociedades rurales poco adaptadas a los rápidos cambios estructurales, demográficos y económicos de este siglo y, sobre todo, de los últimos años […] El problema de hoy es la recesión del control tradicional de la explotación ordenada del espacio y sus recursos, que no ha logrado seguir o adaptarse al reciente y muy veloz cambio en el mundo rural. Este manejo se vuelve insuficiente dado el brutal aumento en la población [y] una pérdida progresiva en el poder del control tradicional, debido a la desestructuración de la sociedad rural, la nueva amplitud de la migración y el empuje hacia el individualismo agrario y la monetización de la economía local (République de Guinée, 1989: 8).

Dicha narrativa constituye el guion de los donantes internacionales y se podrían llenar estanterías con las distintas versiones que aparecen por todo África y más allá. Una revisión reciente de las políticas, enfocado en el componente demográfico, realizada por el Banco Mundial, alega que

> [L]as prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, la dependencia tradicional en la leña para la energía y los materiales de construcción, los arreglos tradicionales de tenencia de la tierra y las tradicionales cargas impuestas sobre las mujeres rurales funcionaron bien cuando las densidades de población eran

> bajas y la población crecía lentamente. Con el impacto del rápido crecimiento demográfico, estas prácticas no pudieron evolucionar con suficiente rapidez. Por tanto, se volvieron la mayor fuente de destrucción del bosque y degradación del entorno rural (Cleaver, 1992: 67).

Se alega que esto conduce a espirales viciosas de barbechos recortados, agotamiento de la tierra, declive de cosechas y una subsecuente migración a las tierras y bosques marginales. La crisis ambiental es menos atribuible al efecto conjunto de la presión demográfica sobre la disponibilidad de recursos, como afirmaba una postura malthusiana clásica, que a los múltiples efectos de la presión demográfica en las instituciones que buscan controlar el acceso a y el uso de los recursos.

Al ejemplificar lo inaplicables que son las narrativas regionales actuales a situaciones locales, los casos Kissidougou y Ziama invitan a un examen más fundamental de los orígenes y propósitos de la narrativa regional misma. Dichas narrativas dependen más del imaginario occidental sobre la sociedad africana —y lo exponen— que de la experiencia empírica; en particular, muestran que los estereotipos nacidos de la era colonial están vivos y coleando en las ciencias sociales aplicadas. Ya sea que se utilicen para justificar políticas de represión externa o para políticas de reorganización social y desarrollo "participativo", las narrativas justifican y crean la necesidad de asignar un papel a personas externas en la toma de control de los recursos naturales. Las suposiciones más amplias implicadas en las narrativas regionales se pueden resumir de la siguiente manera:

> (a) que la vegetación africana alguna vez fue "original" y consistió en una vegetación clímax, i.e, el estado óptimo de la sucesión de plantas que puede existir bajo las condiciones ecológicas dadas. Las condiciones ecológicas prevalecientes no cambian, por lo cual lo que puede existir hoy (e.g., un bosque húmedo en la región bosque y prebosque), también existió recientemente. Contra esta vegetación más natural se pueden juzgar los niveles de "degradación";
>
> (b) que la sociedad africana puede ser vista, en su origen, en términos de un "orden funcional" tradicional. Dicho orden alguna vez estuvo integrado

de forma armoniosa con la vegetación "natural" (e.g., emblematizado en la idea de un "pueblo del bosque" y un "pueblo de la sabana"). Las prácticas africanas de uso de tierras, agricultura y recursos degradan o, en el mejor de los casos, son benignas para la vegetación original. La degradación, por tanto, se limita solo por medio de una organización social funcional (regulación y autoridad). A partir de la degradación ambiental se pueden diagnosticar los males sociales de la disfunción organizativa.

(c) que las poblaciones rurales africanas solo aumentan y lo hacen rápido. El aumento en la población es en sí misma dañina en lo ambiental y lo social;

(d) que la sociedad africana es esencialmente menos sedentaria y se orienta a la subsistencia con un sentimiento anticomercial (e.g., en el imaginario popular de cazadores tradicionales "anticomerciales"). El dinero, la movilidad y el comercio son modernos y conducen a la disfunción socioambiental. La historia africana consistió en la reproducción continua de la tradición hasta que empezó a volverse "moderna", ya sea con mercados y movilidad, intervención colonial o (según algunas obras) con la llegada del islam.

Las asociaciones románticas detrás de estas suposiciones nos indican que el cambio en la vegetación conlleva mensajes morales muy profundos. La "vegetación clímax original" y la "sociedad funcional tradicional" brindan un punto de partida fundamental para que cuando surja alguna preocupación por la sociedad o el ambiente sea posible juzgar que algo está mal y evaluar el grado del daño. Desde este punto de vista, el imperativo es intervenir.

Estas suposiciones, estabilizadas y a veces ocultas dentro del análisis de las ciencias sociales, son destructivas, y en última instancia no tienen relevancia para las políticas. "La dura realidad", como lo explica Sayer (1992), "es que la mayoría de los programas de ayuda humanitaria, especialmente los forestales, fracasan". Como ejemplifican los casos de Kissidougou y Ziama, las narrativas engañosas juegan un papel fundamental en este fracaso. Además, así como hay contranarrativas para estos casos que encajan mejor con los datos de la historia de la vegetación, desde la perspectiva más general también retomamos el espíritu de los artículos de esta sección especial para sugerir algunas suposiciones distintas y una narrativa estabilizante que

reflejan mejor las realidades en torno a los ambientes africanos. Los parámetros de esta contranarrativa coinciden con desarrollos recientes en la teoría ecológica y social, y, de manera significativa, no perpetúan el imperativo de la intervención externa en el control local de los recursos.

Mientras las viejas narrativas contenían una visión de la ecología que debía explicar la desaparición de una vegetación clímax natural, las nuevas líneas de teoría ecológica rechazan la idea de un ambiente singular óptimo. Cuando los historiadores del clima sugieren que África ha experimentado profundas fluctuaciones climáticas, así como cambios en la variabilidad climática, la historia de la vegetación empieza a verse como una historia de continua transición y no como una divergencia de un clímax único que existió alguna vez. La teoría reciente sugiere que dichas transiciones repetidas quizá sucedieron entre estados "estables" de vegetación, cada uno determinado por un complejo multifactorial, y no por tendencias en cualquiera de las variables en particular. Si el factor que causó la transición se revierte a su nivel pretransición, la vegetación podría pasar a otro estado, pero no necesariamente volverá a la inicial (Sprugel, 1991; Scoones, 1994). Dada la multiplicidad de factores en interacción que influyen en cada estado, los cambios entre ellos pueden detonarse por una conjunción histórica particular, quizá única, de factores ecológicos. Desde esta perspectiva, no hay un fundamento para identificar la vegetación fundamental, arquetípica, de una región. La vegetación está en transición continua y su trayectoria la determinan el legado de los itinerarios pasados de la vegetación y las condiciones ecológicas presentes.

Las ideas sobre el ambiente óptimo se ensamblaron muy bien con las ideas sobre una sociedad estática óptima —en estructura y tradición— típicas de la antropología colonial, aunque persisten más allá. Pero las teorías sociales más recientes que le dan peso a la acción social, a los procesos y a su capacidad para determinar las reglas desafían las nociones de una sociedad con una estructura social y orden determinados, sostenida por la adaptación funcional o por reglas y regulaciones. Esta continua estructuración, a lo largo del tiempo y mediante el cambio social, desafía la noción de un estado social "tradicional" primario. La realidad de que las formas sociales en África han estado en una transición constante se ensambla con

la perspectiva de la vegetación en transición continua. No hay un punto de partida en términos de cómo la sociedad valora la vegetación (y por consiguiente no hay fundamento para el argumento moral de que los valores indígenas alguna vez preservaron un ideal más "natural"). Los valores en torno a la vegetación cambian en respuesta a los cambios políticos, sociales y económicos, que a menudo son de naturaleza coyuntural. Los valores colocados en distintos tipos de vegetación, restringidos por las condiciones sociales prevalecientes, también están socialmente diferenciados: las prioridades de los actuales gestores de la conservación global para la vida silvestre del bosque alto son muy distintas de las prioridades de los habitantes toma para los barbechos agrícolas de matorral.

En el contexto de África Occidental, estas transiciones sociales y económicas han tenido lugar dentro de un largo contexto histórico de movimiento y migración, agricultura y comercio, y turbulencia política y religiosa. La relación entre el cambio social y ambiental no gira en torno al aumento dramático de ninguno de estos, sino en las respuestas de la gente a los signos cambiantes dentro de esta continuidad más amplia y dinámica. Los aldeanos kissidougou, por ende, han adaptado la forma de las islas de bosque para cubrir necesidades cambiantes de fortificación y de distintos cultivos comerciales. El cambio demográfico, en vez de consistir siempre en un aumento unilateral de la población, involucra periodos de estabilidad y de declive, de impactos, así como de tendencias seculares. Dependiendo de las condiciones ecológicas y económicas prevalecientes, los efectos de los periodos de crecimiento demográfico pueden ser tanto positivos como negativos.

En las zonas de bosque marginal de África Occidental, la transición climática parece haber involucrado una rehumidificación desde mediados del siglo XIX, seguida de una fase seca relativamente larga (Nicholson, 1979). Donde la combinación de factores ecológicos crea condiciones marginales para el bosque, generando un equilibrio precario entre la vegetación del bosque y la sabana gestionada con las quemas, las actividades de la gente pueden hacer la diferencia permitiendo que se desarrolle vegetación de bosque en los pastizales. Donde las personas han tenido motivos socioeconómicos o políticos para crear bosques, lo hacen, en pequeños parches,

provocando transiciones en pequeñas partes del paisaje, como ha sucedido, por ejemplo, en Kissidougou. En la sabana abierta con densidades poblacionales bajas, es más difícil controlar el fuego, pero a medida que aumentan las poblaciones y las transiciones al bosque son provocadas en más lugares, se reducen las quemas y a la postre se podrían eliminar. Las prioridades agrícolas pueden significar que grandes áreas se mantengan como barbecho de matorral en vez de permitir que se desarrollen en bosque alto. A medida que las poblaciones siguen aumentando, quizá sea necesario acortar los períodos de barbecho y puede que ocurra alguna regresión a la sabana. Pero si en ese momento se va la población, tomando en cuenta el legado de las anteriores prácticas de uso de la tierra de los pueblos, la zona podría desarrollarse como bosque alto, como ocurrió a principios de este siglo en Ziama.

Esta contranarrativa regional brinda posibilidades distintas y más apropiadas para las políticas. Al presentar el cambio socioambiental de una forma que conecta mejor con la experiencia local, se establece una base más efectiva para el diálogo y el trabajo de desarrollo participativo con las poblaciones locales. Al eliminar el vínculo subyacente entre la forma social y vegetal, se elimina la justificación para la intervención externa en la organización de la gestión de los recursos con el fin de restablecer un orden social perdido, ya sea reemplazándolo por el control externo o por medio de la "reorganización comunitaria" promovida externamente desde enfoques recientes más descentralizados. Nos indica que algunas prioridades podrían ser la creación de políticas y condiciones económicas que permitan que las constelaciones locales de gestión de los recursos puedan actuar de manera efectiva, el apoyo a las diversas formas institucionales existentes y la construcción sobre las implicaciones ambientales benéficas de las políticas de tarificación y del desarrollo rural en un sentido más amplio —un enfoque que en la actualidad es apoyado por algunas instituciones de política regional (ENDA, 1992)—. Por último, como alega McNeely, "dado que los factores de azar, influencia humana y pequeña variación climática pueden causar cambios muy sustanciales en la vegetación, [la biodiversidad para] cualquier paisaje determinado variará sustancialmente a lo largo de cualquier periodo significativo de

tiempo– y no hay una única variante necesariamente más 'natural' que las demás" (1993). Desde esta perspectiva, la política ambiental no puede hacer referencia a una pretendida prioridad moral en la recreación de lo natural (o lo social que se fue con él). Se vuelve claramente una cuestión de elección social o política sobre el tipo de vegetación que es deseable en cualquier determinado momento de la historia social, y de asegurar que las perspectivas que entran en conflicto con esto —como sucede entre intereses locales, globales e intergeneracionales— sean articuladas y abordadas de la manera adecuada.

Referencias[7]

Adam, J. G. 1948. Les reliques boisées et les essences des savanes dans le zone préforestière en Guinée française. *Bulletin de la Société Botanique Française*, *98*, 22-26.

Anderson, B. 1870. *Narrative of a Journey to Musardu: capital of the western Mandigoes*. S. W. Green.

Baum, G. A. y H-J. Weimer. 1992. *Participation et développement socio-économique comme conditions préalables indispensables d'une implication active des populations riveraines dans la conservation de la forêt classée de Ziama*. Report (Conakry: République de Guinée: Deutsche Forst-Consult/Neu-Isenburg. RFA/KFW).

Chevalier, A. 1933. *Les bois sacrés des noirs de l'Afrique tropicale, sanctuaires de la nature* (Compte rendu n° 82, 37-42). Société de Biogéographie.

Chevalier, A. 1909. *Rapport sur les nouvelles recherches sur les plantes à caoutchouc de la Guinée française* (Archivo n.º 16276). Archives du Sénégal.

7 N. de T. Algunas referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias difieren de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Cleaver, K. 1992. Deforestation in the western and central African forest: The agricultural and demographic causes, and some solutions. En K. Cleaver, M. Munasinghe, M. Dyson, N. Egli, A. Peuker, & F. Wencelius (Eds.), *Conservation of West and Central Africa's rainforests* (Environment Paper No. 1, 65–78). World Bank.

Dupré, G. 1991. Les arbres, le fourré et le jardin: les plantes dans la société de Aribinda, Burkina Faso. En G. Dupré (coord.). *Savoirs paysans et développement* (181-194). Karthala-ORSTOM.

ENDA. 1992. *Avenir des terroirs: la ressource humaine*. ENDA / GRAF.

Fairhead, J. y M. Leach. (En prensa) *Reversing landscape history: power, policy and socialized ecology in West Africa's forest* [manuscrito].

Fairhead, J. y M. Leach. 1994. Contested forests: modern conservation and historical land use of Guinea's Ziama reserve. *African Affairs*, *93*, 481-512.

Fofana, S., Y. Camara, M. Barry y A. Sylla. 1993. *Étude relative au feu auprès des populations des bassins versants types du Haut Niger*. Monographies des Bassins Kan I, Kan II, Kiss II. Report Conakry. République de Guinée: Programme d'Aménagement des Bassins Versants Haut-Niger.

Green, W. 1991. *Lutte contre les feux de brousse*. Report conakry République Guinée. Projet DEKIN, Développement Rural Intégré de Kissidougou,

Hair, P. E. H. 1962. An account of the Liberian Hinterland c. 1780. *Sierra Leone Studies, NS 16*, 218-226.

Holling, C. S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *4*, 1-23.

Leach, M. y J. Fairhead. 1994. *The forest islands of Kissidougou: social dynamics of environmental change in West Africa"s forest-savanna mosaic*. Report to ESCOR of the Overseas Development Administration.

Leach, M. y J. Fairhead. 1995. Ruined settlements and new gar-dens: gender and soil-ripening among Kuranko farmers in the forest-savanna transition zone. *IDS Bulletin*, *26*(1), 24-32.

McNeely, J. A. 1993. *Lessons from the past: forests and biodiversity* [mimeo]. IUCN.

Nicholson, S. E. 1979. The methodology of historical climate reconstruction and its application to Africa. *Journal of African History*, *20*(1), 31-49.

Ponsart-Dureau, M.-C. 1986. *Le pays Kissi de Guinée forestière: contribution à la connaissance du milieu; problématique de développement*. Mémoire Ecole Supérieure d'Agronomie Tropicale.

Portères, R. 1965. Les noms des riz en Guinée: VI - Les noms des variétés de riz chez les Toma. *Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée*, *12*, 687-728.

Programme d'aménagement des bassins Versants Haute. 1992. *Guinée (Projet Kan II). Plan d'Opération*. Report Conakry, République de Guinée: Programme d'Aménagement des Hauts Bassins du Fleuve Niger.

Programme d'aménagement des Hauts Bassins du fleuve Niger. n.d. Étude sociologique. Report Conakry: République de Guinée.

République de Guinée. 1989. *La gestion des ressources naturelles*. Contribution to the lettre politique de développement agricole (Conakry: République de Guinée: Ministère d'Agriculture et des Ressources Animales, November).

Roe, E. 1991. Development narratives, or making the best of blueprint development. *World Development*, *19*(4), 287–300.

Roe, E. y L. Fortman. 1982. *Season and strategy. Special series on resource management*. Rural Development Committee, Centre for International Studies, Cornell University.

Sayer, J. A. 1992. Development assistance strategies to conserve Africa's rainforests. En K. Cleaver, M. Munashighe, M. Dyson, N. Egli, A. Peuker y F. Wenceslaus (coords.). *Conservation of West and*

Central Africa's rainforests. Environment paper No. 1 (3-17). World Bank.

Scoones, I. (ed.). 1994. *Living with uncertainty: new directions for pastoral development in Africa*. IT Publications.

Seymour, G. L. 1859-1860. The journal of the journey of George L. Seymour to the interior of Liberia: 1858. *New York Colonization Journal*, *IX*(12), *X*(6-8).

Sims, J. L. 1859–1860. *The journal of a journey in the interior of Liberia: Scenes in the interior of Liberia, being a tour through the countries of the Dey, Goulah, Pessah, Barlain, Kpellay, Suloang, and the King Boatswain's tribes, in 1858*. *New York Colonization Journal*, 9(12), 10(6, 8).

Sprugel, D. G. 1991. Disturbance, equilibrium, and environmental variability: what is 'natural vegetation' in a changing environment? *Biological Conservation*, *58*, 1-18.

Starr, F. (ed.). 1912. *Narrative of the expedition despatched to Musahdu by the Liberian government under Benjamin K. Anderson esq. in 1874.* College of West Africa Press.

Stieglitz, F. V. 1990. *Exploitation forestière rurale et réhabilitation des forêts: Premiers résultats d'un projet de recherche interdisciplinaire en Haute-Guinée* [mimeo]. République de Guinée.

Zerouki, B. 1993. *Etude relative au feu auprès des populations des bassins versants types du Haut Niger.* Report Conakry: République de Guinée: Programme d'Aménagement des Bassins Versants Types du Haut Niger.

16. El conocimiento ecológico y tecnológico del fuego: aborígenes ersus guardabosques en el norte de Australia*[1]

Henry T. Lewis

Resumen: Las actitudes de los euro-australianos acerca de los incendios forestales son claramente diferentes de las de los aborígenes. Estas perspectivas contrastantes se confrontan en las diferentes prácticas de quema prescrita empleadas por aborígenes y guardabosques del Australian National Parks and Wildlife Service (ANPWS) en el Kadaku National Park, en el territorio del norte. Una gran parte del problema para el personal del ANPWS para comprender el conocimiento y las prácticas aborígenes involucra las percepciones que los euro-australianos tienen acerca de las "tecnologías simples", la "aboriginalidad" y lo que constituye o no lo "tradicional".

En la región septentrional del Territorio del Norte, la extendida práctica de la quema anual, junto con una población muy móvil y una densidad baja de uso de tierra ha producido una situación en la que resultan inevitables los incendios en los grandes parques nacionales y las reservas. La decisión de si quemar o no quemar sería un lujo que no tenemos, y de hecho hablar en esos términos ignora las prácticas reales sociales, ecológicas y climáticas. La protección completa contra incendios representa un cambio importante con respecto a la práctica antigua. La única decisión que hay que tomar en este sentido es si la quema en el parque debe hacerse en los términos del gerente del parque o de un modo no controlado desde otras fuentes. Parece que el camino más prudente sería seguir las prácticas de los aborígenes, por lo menos mientras tanto (Fox, 1981: 5-6).

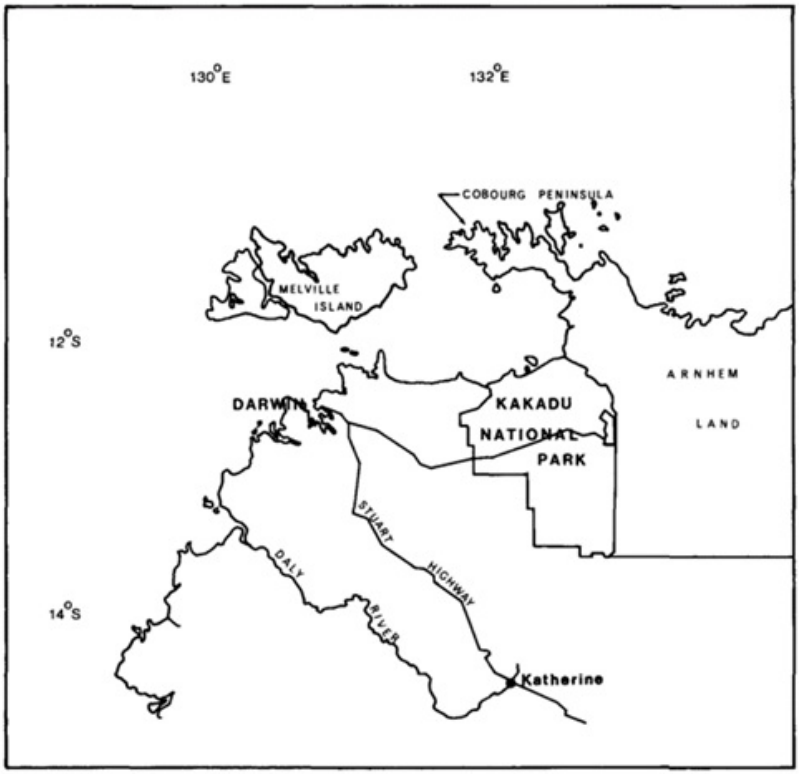
---

1 Publicado originalmente en Henry T. Lewis, 1989, "Ecological and technological knowledge of fire: aborigines versus park rangers in Northern Australia" (*American Anthropologist*, *91*(4), 940-961).
*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

Bill Neidjie es un anciano de la tribu entre el pueblo gagadju y, en su capacidad oficial, un consejero cultural en el Kakadu National Park en el Territorio del norte de Australia (Figura 1). En agosto de 1983, en Cannon Hill, habló de las prácticas y los resultados derivados de la quema en llanuras aluviales y otros tipos de hábitat en su parte del parque, un área grande colindante con Magela Creek, un brazo del East Alligator River. El investigador preguntó por los efectos de un incendio anterior en una masa forestal cercana de bosque de eucaliptos, y luego mencionó el holocausto que había ocurrido ese año en el sur de Australia, a mediados de febrero, los "incendios de Miércoles de Ceniza" que habían arrasado partes de Australia Meridional y Victoria, y mataron 72 personas.

Mientras reconocía la tragedia humana, Neidjie añadió que esto había sido un "crimen" no solo porque algunos de estos incendios habían sido provocados, sino porque se había permitido que el país llegara a estar "tan sucio". Las personas, dijo, deberían "cuidar su campo". Un incendio así no ocurriría en lugares de los que él fuera responsable, un país que él y sus parientes queman con frecuencia. Dijo que lo que había ocurrido en Australia del Sur y Victoria era una "lástima", pero la gente no habría muerto si el país se hubiera "mantenido limpio". Para demostrarlo, arrojó cerillas encendidas sobre la hierba seca de la llanura aluvial y observó solo momentáneamente cómo el fuego ardía y se movía con el viento hacia el centro de la llanura. Después de quemar un poco más de cien metros y llegar a los pastos verdes, pastos más húmedos, el fuego ya había empezado a disminuir y a apagarse mientras se alejaba.

Figura. 1. Sección noroeste del Territorio del Norte de Australia. Visiones culturales del "fuego".



En su mayoría, las actitudes de los australianos blancos en el territorio del norte respecto a los "incendios forestales" —por lo menos entre la población urbana— son muy diferentes a las de Bill Neidjie y otros aborígenes. Aunque no mencionaba los cientos, quizá miles de incendios que los aborígenes provocan en la mitad norte de Australia cada año, un artículo en el *Northern Territory News* de Darwin (16 mayo 1981) exigió la "suspensión en las quemas anuales hasta que el efecto en el monte pueda ser evaluado correctamente por expertos". El objetivo principal del artículo era la quema pastoral —incendios prendidos por ganaderos—, y un oficial

local declaraba: "La cobertura de vegetación mejoraría considerablemente si el monte no se quemara cada año". Los incendios repetidos, continuaba el artículo, resultarían de forma inevitable en un "monte despojado de árboles naturales" —esto en un paisaje, en su mayor parte aún cubierto de bosque, que ha sido incendiado durante los últimos 35 000 o 40 000 años por sus habitantes aborígenes, y donde en los últimos cien años se han sumado las prácticas aún más extensivas de quema de los ganaderos (Lewis, 1985b).

A pesar del prolongado interés de los australianos en los usos y efectos de la quema, existe un gran desacuerdo entre científicos y civiles en cuanto a los beneficios y peligros de los incendios, tanto naturales como provocados. Las interpretaciones basadas en investigaciones y observaciones se han resumido en varias publicaciones (Gill *et al*., 1981; Luke y McArthur, 1977; Stanbury, 1981), de estudios tanto históricos como contemporáneos recogidos en una bibliografía computarizada y actualizada por Gill y Noble (1986). Las opiniones descritas para el estado de Victoria son asimismo características de otras partes de Australia.

> A lo largo de la historia de incendios del Estado, diferentes grupos han percibido los recursos del paisaje de diversas maneras y han tenido actitudes distintas acerca del lugar de los incendios en el paisaje [...] La historia reciente ha sugerido que la gente en Victoria sigue impávida frente a la posibilidad de incendios desastrosos en el paisaje (Gill, 1981: 94-95).

La opinión pública en el Territorio del Norte, en particular la de quienes consideran que el fuego es intrínsecamente destructivo, es la antítesis de las creencias de los aborígenes y los ganaderos. Sin embargo, a pesar del hecho que en muchos aspectos las prácticas de quema de cazadores-recolectores y rancheros son muy parecidas, también difieren en sentidos importantes; la primera se refiere a una amplia gama (un "amplio espectro") de recursos vegetales y animales, el segundo se centra en el ganado y los pastos. Aunque los efectos de cada uno son por lo general similares, los rancheros tienen poca comprensión o apreciación de la quema de los aborígenes, en especial cuando tales prácticas difieren de las suyas y no

favorecen los pastizales y el ganado (Lewis, 1985b). Además de los aborígenes y los rancheros, la Commonwealth Science and Industrial Research Organization (CSIRO) y la Conservation Commision of the Northern Territory (CCNT) se involucran en investigación sobre los efectos y usos de la quema controlada; esto se debe al creciente interés por la ecología del fuego. Por último, los rancheros reciben asesoría y ayuda para realizar programas de manejo de incendios de parte de otra agencia, el Bush Fires Council of the Northern Territory.

Desde la propuesta inicial de establecer el Kakadu National Park (1980), el Australian National Parks and Wildlife Service (ANPWS) ha reconocido la importancia de los usos indígenas de los incendios en el hábitat y la necesidad, en la medida de lo posible, de duplicar las prácticas tradicionales aborígenes. Al mismo tiempo, las propuestas del parque han previsto que los aborígenes desempeñarían un papel en las actuales prácticas de gestión de incendios.

Los propietarios aborígenes tradicionales del parque han expresado su deseo de que se restablezcan los antiguos regímenes milenarios. Algunas evidencias sugieren que su uso del fuego fue importante en el mantenimiento de la diversidad ecológica (ANPWS, 1980: 309).

De manera algo cautelosa, se afirmó que "algunos elementos de los usos tradicionales del fuego" podrían ser utilizados como parte del programa del manejo de fuego del Kakadu (ANPWS, 1980: 177). Seis años después, un segundo plan de gestión, revisado, reiteró el objetivo de "restablecer, en la medida de lo posible, las pautas de quema tradicionales de los aborígenes", en parte buscando la "cooperación, asesoramiento y participación de los aborígenes que viven en el Parque" (ANPWS, 1986: 39). A lo largo de la década de funcionamiento del parque, los aborígenes han provocado incendios con regularidad, aunque la mayoría de las veces no en cooperación con el personal del ANPWS, mientras que el ANPWS ha llevado a cabo sus propias prácticas de quema sin buscar el consejo de los aborígenes.

A la mayoría del personal del parque le sigue preocupando que los aborígenes quemen ciertos tipos de hábitat sin restricciones o alguna forma de supervisión. Los funcionarios del parque con los que Bill Neidjie y otros aborígenes de Kakadu tratan habitualmente son euro-australianos,

quienes constituyen la mayoría de las personas y todos los altos funcionarios contratados por el ANPWS y el CCNT. Estas son las personas con quien Bill Neidjie trabaja como consejero cultural, asesoramiento que, de manera ideal, pero rara vez en la práctica, incluye su conocimiento acerca de cómo, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias iniciar incendios de hábitat. Las actitudes y prácticas respectivas que aborígenes y guardabosques tienen respecto a la quema, y la tregua precaria que existe entre ellos, es el tema de este artículo.

La ecología del fuego de ANPWS

Las prácticas de quema aquí descritas son, en gran parte, las que estuvieron en vigor hasta 1984. Dado que la investigación para este artículo se llevó a cabo en 1980 y 1983, el personal del ANPWS en Kakadu ha iniciado y mantenido un programa de gestión de incendios más completo que el que existía hace cinco u ocho años (Braithwaite y Estbergs, 1985; Press, 1987; 1988). Estos cambios se reflejan, y en parte se derivan, de las ideas expresadas en el segundo Plan de Gestión del Parque Nacional de Kakadu (ANPWS, 1986). Con el ambiente del "top end" más estudiado y la dinámica del fuego más comprendida, el ANPWS tiene hoy menos dudas sobre el uso del fuego como una herramienta de gestión ambiental de las que tenía hace cinco años.

Como ocurre con todos los grupos que utilizan el fuego en el norte de Australia, las prácticas de quema y exclusión de fuego empleadas por el ANPWS son específicas para cada hábitat (Figura 2). La parte costera de Kakadu Park está bordeada por dunas de arena y bosques de manglar. Justo en el interior, las llanuras costeras están dominadas por bosques abiertos de eucaliptos altos y otros arbolados de eucaliptos. Los árboles de los bosques altos abiertos son principalmente eucaliptos de corteza fibrosa (*Eucalyptus tetrodonta*) y "woolybutt" (*E. miniata*), con un subsuelo irregular de arbustos, palmas y pastos. Los árboles allí son más altos (15-19 metros) que en los bosques de eucaliptos cercanos (10-12 metros), donde los suelos son más pobres y superficiales. En los bosques de eucaliptos los árboles que dominan son el boj (*E. tectifica*) y el sanguino (*E. latifolia*),

mucho más dispersos y con un sustrato más uniforme de pastos. En los dos hábitats, el subsuelo está cubierto de hierbas de sorgo (1-2 metros), que en la estación seca son muy inflamables.

Las áreas restantes se componen de llanuras aluviales de agua dulce, pantanos de corteza de papel y pequeñas manchas de selva tropical. Unos kilómetros tierra adentro las llanuras costeras están bordeadas por una escarpa de arena y piedra. El terreno inmediato superior a la escarpa está profundamente fisurado y es casi imposible atravesarlo. Más al interior, la vegetación de la escarpadura cede ante los arbolados más uniformes de eucalipto y una cobertura más densa de pasto de sorgo, un paisaje menos atractivo para las metas de espectro amplio de los cazadores-recolectores, pero el hábitat preferido del ganado.

Las preocupaciones anteriores del ANPWS acerca de la quema incluyeron esfuerzos para excluir los incendios de las áreas visibles desde las carreteras, como explicó un guardabosque en 1980, "un bosque totalmente quemado no es lo que vienen a ver los visitantes". En 1983, menos preocupados por la sensibilidad de los turistas, las prácticas de gestión de incendios incluyeron la quema de hasta 30% de los bosques altos y abiertos y de los eucaliptos. Sin embargo, con respecto a otros tipos de hábitat, el personal del parque se mantiene más cauteloso, en especial acerca de la quema de las llanuras aluviales y los pantanos de corteza de papel, y en la escarpadura. En varios memorandos que circularon entre los guardabosques del distrito, los especialistas técnicos y el personal supervisor subrayan una y otra vez la "fragilidad" de la llanura aluvial, la corteza de papel y los hábitats de la escarpadura. Los argumentos para la reducción o la eliminación de la quema a menudo se hacen en términos de "especies sensibles al fuego". Como hace el Bush Fires Council, el personal del parque destaca las quemas de la estación seca, con una fecha límite del 30 de julio.

Aunque las quemas del ANPWS son ahora más extensas que en 1980 y 1983, en general se limitan a zonas de bosque alto y abierto y bosques de eucaliptos. Los estudios recientes (Braithwaite y Estbergs, 1985; Press,

1987; 1988[2]) no mencionan el uso del control de incendios en los bosques monzónicos, llanuras aluviales, pantanos de corteza de papel o escarpes, regiones a las que el personal del parque se refería regularmente como "hábitats frágiles" en 1980 y 1983. A pesar de una declaración reciente en la que se indica que "el ANPWS está restableciendo las formas de prácticas de quema de los aborígenes" (Press, 1987: 247), las prácticas que se describen como aquellas que usan los guardabosques no son las que describen o demuestran los informantes aborígenes.

Otra característica de la tecnología de quema y la ecología del fuego del ANPWS sería que el conocimiento y la experiencia varía enormemente entre un individuo y otro. Los empleados nuevos llegan al parque con poco o ningún conocimiento del rol del fuego en la región de la sabana tropical de Australia. Aunque la mayoría reciben instrucción y entrenamiento sobre el rol de fuego en el norte, se mantienen escépticos y cautelosos sobre su uso. A pesar de los desarrollos relativamente recientes en los ámbitos de la tecnología del fuego y la ecología del fuego, la gran mayoría del personal europeo perciben el fuego como destructivo en esencia. El conocimiento de la ecología del fuego que puede tener el personal del parque se deriva de otras áreas, en particular en el conocimiento adquirido sobre manejo de parques, la protección de incendios y la conservación en destinos en el sur del país o de la formación universitaria. Ni como concepto ni en la práctica resulta particularmente apropiado para la dinámica de la ecología del fuego en el norte, y mucho menos para comprender el papel que los aborígenes han desempeñado y siguen desempeñando en su uso.

2 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas. En dicha lista únicamente figuran obras del mismo autor con otras fechas de publicación.

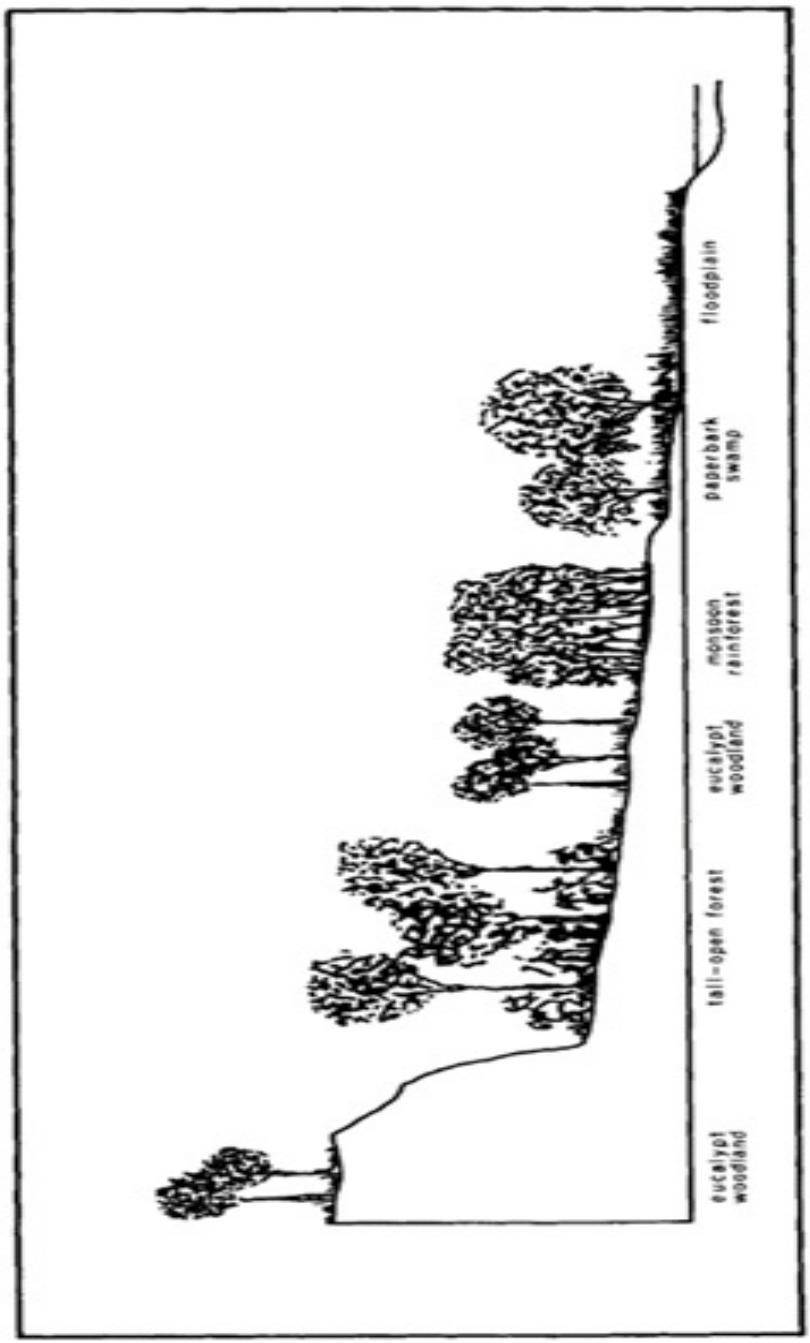


FIGURA 2. Tipos de hábitat estilizados, Parque Nacional de Kakadu.

En 1983, los conocimientos de los que disponía el ANPWS eran muy difusos y poco sistemáticos; un conocimiento que se refería a una serie de "cosas" diferentes del ambiente, en particular a especies individuales de plantas y animales, y que correspondía a un conocimiento particularista más que holístico o ecosistémico. Hoy en día, aunque la investigación ecológica está mucho más avanzada y la experiencia de al menos un miembro *senior* del personal se basa tanto en la investigación como en la gestión de campo (Press, 1987; 1988a; 1988b), el conocimiento del personal europeo sobre la tecnología y ecología del fuego no es apreciado del todo por todo el personal. Los pocos europeos que apoyan sin duda la idea de un plan de manejo de fuego basado en las prácticas tradicionales aborígenes siguen siendo una minoría.

Así, para la mayoría del personal euro-australiano del ANPWS, la ecología del fuego y el manejo del fuego son esencialmente nuevos campos de conocimiento sobre los cuales muestran preocupación e incertidumbre. El personal del parque de Kakadu se encuentra en una situación muy diferente de la que afrontan los guardabosques en la mayoría de las demás zonas de Australia. No se trata solo de que deban enfrentar problemas de gestión de incendios (es decir, sus propios usos de quema controlada) y la protección contra incendios. Durante gran parte del año, también deben lidiar con una situación que involucra el uso del fuego por parte de aborígenes residentes, aborígenes no residentes en su camino hacia y desde Arnhemland, así como incendios procedentes de ganaderos cercanos, cazadores de búfalos, funcionarios y empleados de las minas, y algún que otro turista. Como lo describió un guardabosque algo cauteloso de los incendios: "¡Es como vivir en una casa llena de piromaniacos!". En estas circunstancias, y sin poder restringir la quema a los incendios controlados por el personal del parque, no sorprende que los guardabosques euro-australianos se preocupen por la cantidad y variedad de quema que ocurre a su alrededor.

El personal del Parque en Kakadu incluye un superintendente, un diputado superintendente, cinco supervisores del distrito, una variedad de "especialistas" (cultural, biológico, entrenamiento, manejo de incendios) y diez guardabosques. Además, hay tres consejeros culturales aborígenes

y ocho guardabosques aborígenes. El personal euro-australiano ha acudido a sus destinos con entusiasmo y ganas de trabajar de forma directa y eficaz con residentes y empleados aborígenes, esto dentro de una relación bastante singular para los trabajadores de la vida silvestre y la conservación. A pesar de una serie de problemas, las relaciones interpersonales entre blancos y aborígenes han funcionado razonablemente bien (Weaver, 1984). Las distintas formas en que los dos grupos entienden y cooperan en la quema controlada es un aspecto tanto de los problemas como de los logros de estas relaciones.

A pesar de las buenas intenciones, la relación resulta inevitablemente algo paternalista y, hasta cierto punto, etnocéntrica; un ejemplo más de las situaciones de contacto que han caracterizado la historia de las relaciones entre europeos y aborígenes. Un proceso continuo que oscila entre los extremos de un paternalismo benevolente y amistad real, por un lado, y por el otro, la explotación descarada y el racismo amargo. Ninguno de los australianos entrevistados se mostró desinteresado por las prácticas de quema aborígenes, pero solo dos de ellos pensaron que algo importante seguía formando parte de los "estilos de vida tradicionales" y que merecía la pena replicarlo. Algunos cuestionaron la relevancia de las prácticas "tradicionales" de quema para las necesidades del manejo de parques "modernos". Como quizá ocurre en todas las sociedades urbanas-industrializadas, y lo que es sin duda el caso de la sociedad australiana en general, pocos guardabosques europeos cuestionan la superioridad y la importancia del conocimiento científico sobre el indígena. El manejo, sugiere el argumento, es un axioma de las metas de conservación del Servicio de Parques. Los regímenes tradicionales de fuego, según un administrador, eran desorganizados y "ad hoc".

La "ecología del fuego" aborigen

No hay especialistas del fuego ni "oficiales del control del fuego" entre los aborígenes; la edad es el factor principal que afecta la cantidad de conocimiento individual. Las generaciones mayores, por medio de la palabra y el hecho, instruyen a las generaciones subsiguientes. El conocimiento de la

quema, como en general el conocimiento de la caza y la recolección, está mucho menos fragmentado entre individuos.[3] El conocimiento tradicional ecológico de los aborígenes es un sistema más cohesivo y holístico, y parte de un sistema mayor de la tecnología de los cazadores-recolectores. Los aborígenes son conscientes de los procesos que relacionan e integran las áreas, y reconocen que el fuego, de varias intensidades y frecuencias, y en diferentes momentos, es un factor muy importante en esa integración.

Las comprensiones y aplicaciones del fuego como una "herramienta" de gestión en los bosques monzónicos costeros del norte de Australia han sido descritas por Haynes (1982; 1985), Jones (1975; 1980b) y Lewis (1985a; 1985b). Con algunas variaciones menores —quizá reflejando las diferentes áreas involucradas y aspectos de la presentación de informes—, todas estas descripciones se parecen: las prácticas de la quema aborigen derivan de la comprensión de cómo los incendios influyen en la distribución y la abundancia relativa de los recursos de plantas y animales. Claramente es una forma de manejo ambiental de recursos basada en el conocimiento ecológico tradicional.

El supuesto fundamental de la ciencia ecológica es que cada organismo afecta y a su vez se ve afectado por su entorno. La quema de hábitats es una parte en particular importante del efecto general que los cazadores-recolectores tienen sobre las comunidades de plantas y animales. Los ecologistas reconocen de forma amplia la importancia de los incendios para influir en el medio terrestre, y en los últimos veinte años el ámbito de la ecología del fuego ha sido significativamente relevante en campos como la silvicultura, la ciencia de las plantas y la botánica:

> El fuego es un factor mayor que llega a ser casi una parte del "clima" normal en moldear la historia de la vegetación en la mayoría de los ambientes

3 Betty Meeham y Nancy Williams (comunicación personal) han señalado que la mayoría de la quema tradicional en Arnhemland, como la mayoría de las actividades de subsistencia en general, son llevadas a cabo por mujeres. Ganaderos, aborígenes y no aborígenes, indicaron que este también sería el caso con los aborígenes que viven en las estaciones ganaderas donde los hombres quemaban para el ganado, mientras las mujeres quemaban para favorecer a una variedad tradicional de recursos de plantas y animales.

> terrestres de la tierra. Como ocurre con muchos factores ambientales, los humanos han modificado enormemente sus efectos, aumentando su influencia en muchos casos y disminuyendo en otros […] Por tanto, es un factor limitante extremadamente importante, aunque solo sea porque el control del fuego es mucho más viable que el control de otros factores limitantes (Odum, 1983: 278-279).

En comparación con otras prácticas tecnológicas —como el uso de lanzas, armas de fuego, transporte motorizado y palos de cavar— no hay nada que los aborígenes hagan ahora (o hicieran en el pasado) que sea tan importante desde el punto de vista ecológico como el uso que hacen de los incendios en sus hábitats. El argumento hipotético de Horton (1982) de que las prácticas de quema aborígenes se limitaban a reproducir los patrones naturales de la quema es sencillamente erróneo, y Hallam (1985) ha mostrado en efecto las limitaciones de su posición.

El reconocimiento de los efectos variados y pronunciados que los aborígenes y otras sociedades forrajeras han ejercido en la mayoría de los entornos del mundo supone un alejamiento significativo de la visión antropológica tradicional que ha retratado, y en gran medida sigue retratando, a los cazadores-recolectores como poseedores de una "tasa de entropía teóricamente baja", y que son "manifiestamente incapaces de modificar su entorno" (Ellen, 1982: 56). Ya no resulta suficiente describir la ecología humana o cultural, ni siquiera a los estudiantes de licenciatura, como enfoques limitados al estudio de la "influencia del ambiente sobre la cultura" (Ember y Ember, 1988: 39).

La ausencia de interés por parte de los antropólogos en el uso del fuego a manos de cazadores-recolectores persistió mucho tiempo después de que Stewart destacara por primera vez su importancia ambiental hace treinta, cuarenta años (1951; 1954; 1955). Sin embargo, dada la perspectiva que describe a los cazadores-recolectores como ambientalmente benignos, además del punto de vista folk euro-estadounidense en el que el fuego es inherentemente destructivo, no es sorprendente que los usos del fuego de hábitats no hayan sido reconocidos de forma amplia como importantes para las adaptaciones

de cazadores-recolectores, pastoralistas nómadas, o incluso en la mayoría de los casos de los agricultores de "tala y quema".

Las prácticas de quema de los gagadju, igual que las de otros aborígenes en lugares remotos de Australia, se relacionan con consideraciones acerca de los tipos de hábitat involucrados, los recursos allí encontrados, las relaciones de fauna entre hábitats y un amplio número de circunstancias situacionalmente específicas y oportunistas. Todas las zonas biológicas se explotan en distintos grados y todas se gestionan de diferentes maneras (incluida la exclusión controlada del fuego), dependiendo de las características del ecosistema, la accesibilidad y su valor percibido para las necesidades de caza, recolección y prohibiciones rituales. La quema se programa en términos de un calendario mental-cultural, y algunos de estos han sido producidos por investigadores. El calendario para la región del río South Alligator, representado en la lengua Gundjeidmi, tiene seis estaciones mayores (Figura 3).

Mientras que las estaciones pueden ajustarse a grandes rasgos al calendario gregoriano, las partes individuales del año y la forma en que las personas actúan sobre ellas son el resultado de factores climáticos y biológicos, y no solo el paso de días, semanas o meses. Eventos como el enjambre de libélulas, la floración de varios árboles frutales, el aspecto de la vegetación, la llegada de especies particulares de aves, el "sentir" del aire, y la duración y terminación de las tormentas del final de la estación son todos sucesos naturales que señalan el principio y final de las estaciones —y los tiempos apropiados para la quema—. Dados los factores específicamente locales, las condiciones varían de una zona, o incluso de una ladera o de un tipo de vegetación a otra. En términos de la quema, todo esto se combina con otras consideraciones acerca del valor de los recursos locales, el hecho que un grupo o individuo puede no volver a estar en la zona (en un mejor momento), el paso de las estaciones desde la última quema, la necesidad de una "quema correctiva" (véase más adelante) y otras circunstancias específicas y oportunas.

Aunque la mayor parte de las quemas se producen durante la estación seca, algunos fuegos pueden producirse durante las breves pausas de una o dos semanas entre las lluvias monzónicas; por lo regular esto ocurre

a mediados de febrero. Si los combustibles están suficientemente secos en ese momento, se encenderán fuegos alrededor de los asentamientos y campamentos, en particular para limpiar la cubierta de arbustos y hierbas donde pueden encontrarse serpientes. Con cinco de las más venenosas serpientes del continente en la región (víbora de la muerte, taipán, tigre, parda y parda real), los aborígenes se preocupan por la concentración de serpientes en áreas cada vez más limitadas de tierra alta durante la época de lluvias.

Los primeros incendios de la estación seca se inician después de las lluvias monzónicas, pero antes de las últimas tormentas convectivas: las *banggereng* o 'tormentas de derribo', en las que se aplastan masas de hierba de sorgo de uno a dos metros de altura. En este momento la quema se inicia en los márgenes de las llanuras aluviales, donde el nivel del agua ha descendido y la cubierta vegetal expuesta de hierbas se seca antes que las de los bosques cercanos o las de las llanuras aluviales. Además de los animales que se verán atraídos por la nueva vegetación, los bosques húmedos y los pantanos de corteza de papel quedan protegidos contra incendios más grandes y calientes que se producirán unas semanas más tarde en los bosques altos y abiertos de eucaliptos. A su vez, estas quemas de borde también protegen contra la propagación de incendios que más tarde se prenderán en las llanuras aluviales.

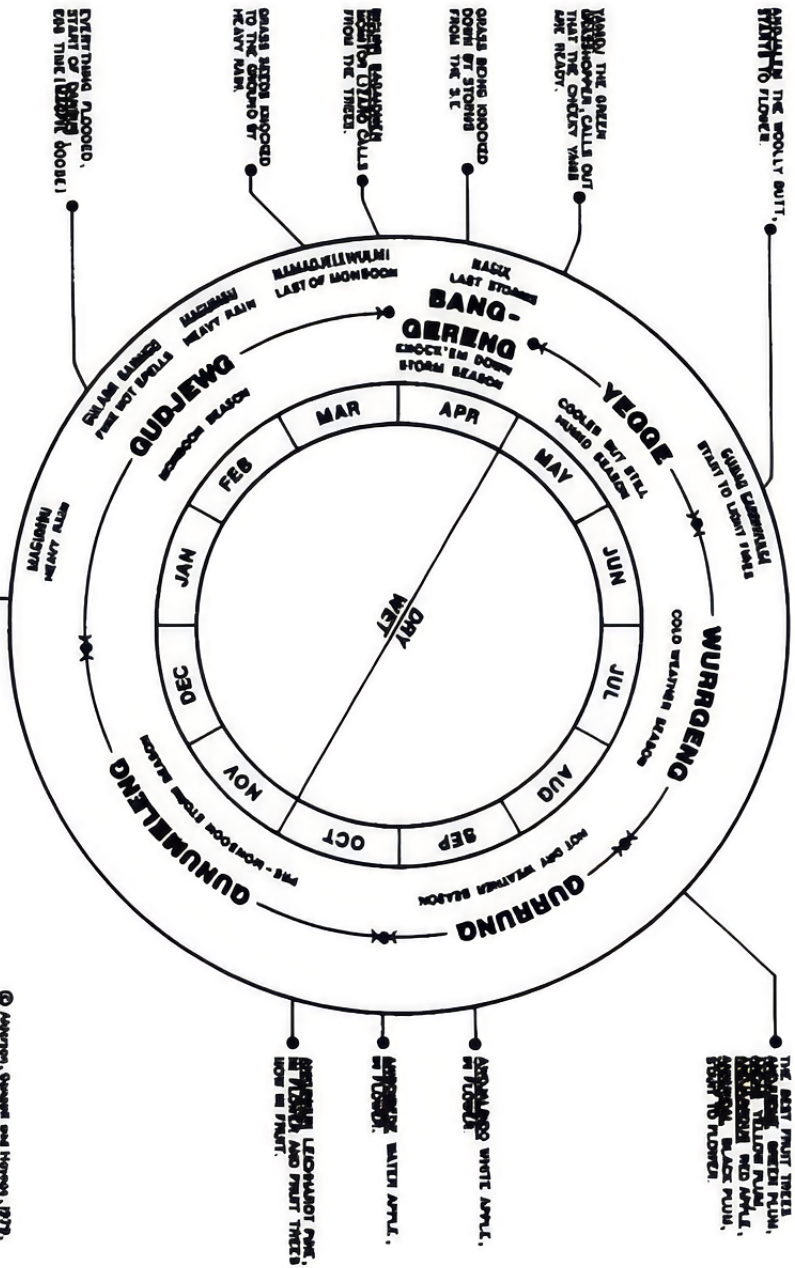


Figura 3. Calendario estacional aborigen.

En las siguientes semanas y meses, los incendios se iniciarán de manera progresiva hacia el centro de la llanura aluvial mientras el nivel del agua retrocede y los pastos se secan. Cada incendio quema desde la frontera de la zona quemada previamente hacia los pastos más húmedos, donde se extingue. Como consecuencia, las partes centrales de una llanura aluvial pueden quemarse con seguridad hasta mediados de noviembre, meses después del inicio de la quema en los márgenes. Con esta serie de etapas sucesivas disponibles, los canguros antilopinos y los ágiles ualabíes pueden frecuentar estos sitios hasta bien avanzada la estación seca. Como han señalado Haynes (1985) y Jones (1980b), y ha sido confirmado por informantes en Kakadu, algunas porciones de la llanura aluvial se queman por segunda vez en la misma estación donde la humedad del suelo es suficiente para otra "cosecha" de pastos.

Las aves acuáticas son un recurso importante de la llanura aluvial, en especial los gansos urraca, explotados tanto por sus huevos como por su carne, y los gagadju consideran que la quema es significativa para los requisitos de anidamiento y alimentación de la especie. Los gansos, se dijo, deben ser capaces de alimentarse alrededor del nido, pero donde los detritus no quemados se han acumulado en capas gruesas y enmarañadas, es más difícil para el ganso obtener nuevas raíces y las cantidades necesarias de arena. Sin el calcio que proporciona la arena, dicen, el cascarón de los huevos sale blando y se reduce el número de polluelos. Por último, conforme avanza la estación seca, tanto las serpientes venenosas como no venenosas se retiran a las limitadas zonas de hierba inundada, cada vez más peligrosas para los grupos de personas, normalmente mujeres y niños, que recogen tortugas y serpientes de agua no venenosas. Las quemas reducen en parte este peligro, y los últimos incendios se hacen siempre antes de que las aves acuáticas empiecen a anidar tras las primeras lluvias de mediados de diciembre.

En las zonas boscosas, la mayor parte de las quemas de la estación seca comienza en mayo, sobre todo con la floración de los árboles lanudos. Este es el inicio de la "temporada de frío", con temperaturas nocturnas de 18° a 20° C, y marcada por la llegada de vientos frescos del sureste. Tres consideraciones generales se aplican en la quema de bosques abiertos y arbolados, aunque a la vez las dos áreas se valoran y gestionan de maneras algo diferentes.

En primer lugar, los aborígenes subrayan que los incendios deben prenderse con las condiciones de viento que por lo común ocurren a mediodía. Así no solo se pueden dirigir los incendios con más facilidad al conocer los patrones estacionales del viento (por ej., quemando en la dirección de áreas ya quemadas o con cortafuegos naturales de vegetación más húmeda), las llamas y las columnas de convección se inclinan hacia adelante por el viento, con el resultado de que la altura del daño por quemadura se reduce a menos de tres metros y, a menudo, a menos de metro y medio. Esto se considera importante para proteger las flores de los árboles que dan frutos, árboles que constituyen un componente de la dieta tanto de los aborígenes como de algunos de los animales que cazan, como el zorro volador (o murciélago frugívoro) y la zarigüeya.

En segundo lugar, los incendios en esta época son relativamente pequeños (entre 0.5 y 25 ha) e irregulares, con el resultado de que grandes extensiones de vegetación intermedia quedan sin quemar. Aun dentro de las secciones quemadas, los efectos son desiguales cuando la quema ocurre muy temprano en la estación seca. Por el contrario, grandes incendios de finales de temporada dejan mucho menos hábitat, mientras que los sitios individuales arden con más intensidad y profundidad. Hasta 40 o 50% de un área dada de arbolado y bosque alto abierto puede quedarse sin quemar o solo parcialmente quemada como resultado de los incendios tempranos, y existe una diversidad pronunciada en las etapas de rebrote anual.

En tercer lugar, los incendios de principios de temporada se extinguen a última hora de la tarde o a primera hora de la noche. Al inicio de la estación seca, los incendios pueden durar poco más que una hora, pero a mediados de julio arden hasta altas horas de la noche antes de coincidir con el rocío de la madrugada. En agosto, momento en que los incendios arden durante toda la noche, la propagación se ve limitada por el mosaico de zonas quemadas y no quemadas. Esta situación hace posible, incluso en esta época, que los individuos limiten los incendios utilizando el viento para "apuntar" las llamas hacia los lugares quemados.

La humedad alcanza su punto más bajo hacia mediados de agosto, con la llegada de la "época de calor", después de la cual solo se encenderán unos pocos incendios de caza. Estos incendios de finales de la estación seca son iniciados

solamente por dos o más individuos para crear un círculo de fuego para rodear un área de algunas hectáreas donde se piensa que se encuentran canguros y ualabíes. Al haber creado un anillo de fuego, los cazadores se mueven por el centro con la esperanza de cazar los marsupiales macropodos mientras se desplazan con miedo y confusión. Además de canguros y ualabíes, también se pueden cazar *bandicoot*, ratas marsupiales y cabras.

Durante los días, e incluso horas posteriores a un incendio, mucho antes de que aparezcan los nuevos brotes, los ualabíes y canguros llegan de las áreas circundantes a los sitios recién quemados para excavar en busca de las raíces de pastos y ñames silvestres. Los cazadores son muy conscientes de las respuestas de comportamiento de los animales hacia las condiciones del incendio y posincendio en varios hábitats, en diferentes momentos del año, y las especies deseadas se cazan de acuerdo con este conocimiento. La comprensión que los aborígenes tienen de estas relaciones y su uso selectivo del fuego les permite gestionar y predecir lo que de otra manera serían en esencia eventos naturales aleatorios y altamente impredecibles.

Aunque los patrones generales del incendio usado para los arbolados de eucalipto son similares a aquellos usados para los bosques altos-abiertos, tanto las características de las masas forestales como sus diferentes valores de los recursos dan lugar a prácticas de quema algo diferentes. En general, los incendios son más grandes y alcanzan temperaturas mayores debido a las áreas reducidas de sombra; los vientos se ven menos modificados por las copas delgadas de los árboles, y una superficie más uniforme de pastos de sorgo. Además, muchos incendios de los arbolados se prenden mucho más tarde, incluso tan tarde como a mediados de noviembre, con el inicio de las tormentas premonzónicas. La oferta de recursos es más limitada en los arbolados y la caza se enfoca en canguros y ualabíes cuando llegan a las áreas quemadas para excavar las raíces o alimentarse de los nuevos brotes verdes. Dadas las características del hábitat del arbolado y el espectro más limitado de recursos, las mayores diferencias con el bosque abierto tienen que ver con la escala, intensidad y duración de los períodos de quema.

Los bosques tropicales y los pantanos de corteza de papel no se queman por lo regular. Las preocupaciones de los aborígenes por los bosques monzónicos

se refieren al tipo de comunidad vegetal en su conjunto (que tolera mucho menos el fuego), los animales que se esconden en los bosques pluviales y la importancia que tienen estas zonas para los significados rituales y totémicos. Sin embargo, los comentarios de algunos informantes indican un cierto grado de variación en lo que respecta a los incendios en los bosques pluviales. Mientras que algunos aborígenes sostenían que no se prendía fuego en los bosques pluviales, otros indican que "a veces" sí se hace, pero solo después de que los diferentes tipos de vegetación alrededor han sido protegidos por cortafuegos y en el momento en que los incendios solo queman la masa forestal a lo largo del suelo, con llamas que no alcanzan más de unas pocas pulgadas de altura. Estos incendios ocasionales son necesarios para limpiar la hojarasca que, a lo largo del tiempo, puede inhibir y esconder el crecimiento de los ñames.

También se dice que los pantanos de corteza de papel no se queman, pero a veces sí se hace, cada cinco o diez años, de manera accidental, aunque en otros momentos se hace a propósito. Como en el caso del bosque pluvial, la acumulación de "basura" es el factor principal, y después de unos cuantos años se dice que el suelo está "sucio". La cubierta vegetal por debajo de los alcornoques se quema cuando los niveles del agua han descendido y cuando los combustibles están lo suficientemente secos como para provocar un incendio de baja intensidad. Por tanto, se queman antes de que los combustibles estén curados por completo para no dañar gravemente las cortezas de papel y otras plantas menos resistentes al fuego en estos hábitats.

En parte debido a la dificultad de atravesar el terreno escarpado, áspero y profundamente fisurado, la explotación de los recursos en las mesetas es mucho más limitada que en los hábitats de baja altitud. El spinifex y otros pastos ásperos y arbustos del paisaje de la meseta son muy inflamables, y los incendios que ocurren allí en manchas del arbolado de eucalipto y masas forestales de brezales y matorral pueden ser muy intensos, en especial cuando se prenden muy tarde en la estación seca y en áreas que no han sido quemadas durante varios años.

Para quemar la escarpa, a menudo se prenden fuegos desde la base de un acantilado encendiendo en lugares donde un arroyo o un río ha cortado profundamente la meseta. Los fuegos incendiarios se programan para aprovechar los vientos dominantes del mediodía procedentes del sur y del este, de modo que cuando el

fuego alcanza la cima del acantilado es arrastrado hacia la cara de la montaña. Los animales atrapados en su camino están obligados a tomar los senderos de caza donde los cazadores que les esperen pueden dispararles. Las especies perseguidas aquí incluyen el ualabí negro y el ualabí de roca. Aunque se puede llegar a los bosques por senderos, la meseta de arenisca es una zona menos importante para los habitantes de las llanuras costeras, y la gestión de sus recursos es irregular y se trata con mucha menos consideración que las llanuras costeras.

Si bien las consideraciones prácticas tienen una importancia variable, también se tienen en cuenta los aspectos estéticos. Los temas de "limpieza" y "cuidado" del propio país son motivaciones en particular fuertes para el uso del fuego (Haynes, 1985; Jones, 1980a; 1980b). Un paisaje que resulta "sucio" con pastos densos, mucha hojarasca o una maraña de maleza es considerado un paisaje que no ha sido cuidado, y al entrar o regresar a estas áreas, se prenden incendios para "corregirlo". La quema correctiva puede hacerse sin considerar el momento del año, ya que, a ojos de los informantes, más retrasos solo pueden empeorar una situación de por sí negativa. Los aborígenes dan la impresión a los forasteros de tener casi una compulsión maniaca por restablecer el fuego en masas de vegetación descuidadas y cubiertas de maleza.

Los incendios derivados de su preocupación por limpiar un entorno, sobre todo en la estación seca, son a menudo destructivos en opinión del personal de los parques euro-australianos. Los aborígenes son conscientes de que las consecuencias de la quema correctiva ponen en evidencia los problemas que surgen cuando los combustibles se acumulan durante varios años. Sin embargo, la infracción consiste en haber permitido que se desarrolle esta situación de descuido, no en los medios aparentemente draconianos necesarios para remediar. No quemar un área de bosque más viejo y abandonado a finales de la estación seca es una ofensa mayor que dejarlo un año más y permitir que empeore la situación. El hecho de que hoy en día la gente no vaya con tanta frecuencia a zonas remotas y no realice quemas con regularidad no es, a sus ojos, una justificación para no quemar en las raras ocasiones en que la gente sí se encuentra allí, aunque sea en momentos poco recomendables para prender fuego.

En la actualidad, sin duda hay más incendios de finales de temporada que en el pasado. Sin embargo, a ojos de los informantes aborígenes, el problema

no son los incendios de finales de temporada, sino la falta de incendios al inicio de ella. Los aborígenes tienen preocupaciones emotivas y éticas muy fuertes acerca del uso del fuego, y sus acciones no pueden explicarse por la visión simplificada euroamericana que concibe a los incendios del hábitat como inherentemente malos o peligrosos.

Así, podemos decir que las prácticas tradicionales de quema de los aborígenes involucran el encendimiento selectivo de fuegos (y a veces su no provocación) en varios momentos del año (o incluso del día), a través de una variedad de hábitats (quemados con distintas frecuencias e intensidades), para influir en la productividad relativa y la distribución espacial de un espectro amplio de especies de plantas y animales. La aparente despreocupación con que se hace todo esto da poca o ninguna indicación de los conocimientos que los cazadores-recolectores aborígenes tienen sobre la amplia gama y los variados efectos que los incendios tienen en los hábitats locales. La incapacidad o renuencia de los europeos en reconocer el conocimiento tradicional ecológico —al sostener su carácter no científico o afirmando que ya ha cambiado—, no obstante, no anula el hecho de que los aborígenes todavía saben mucho sobre los efectos variables del fuego en los distintos hábitats de Kakadu y las zonas cercanas. Los comentarios del personal euro-australiano de que existe conocimiento insuficiente acerca de los efectos de la quema, o declaraciones escritas de que "las relaciones entre la fauna y el fuego en Top End se entienden pobremente" (Press, 1987: 247), se aplican más a la ciencia que al conocimiento aborigen.

Guardabosques *versus* aborígenes

Tanto los aborígenes como el personal europeo comentaron sobre las respectivas prácticas de quema del otro. Las afirmaciones más frecuentes de los aborígenes acerca de los europeos rondaban en torno a su cautela frente a la quema: "Tienen miedo de quemar en los momentos correctos", expresaba un anciano aborigen. El comentario más frecuente que hicieron algunos (pero no todos) por parte del personal europeo acerca de los aborígenes fue que quemaban en una manera "caótica" y que eran "indiferentes" a los resultados de sus incendios. Y pese a reconocer que las prácticas indígenas de quema podrían

haber sido eficaces durante el tiempo previo al contacto, la parte central de su argumento en 1983 era que los aborígenes ya no eran tradicionales y que lo importante en ese momento eran las preocupaciones sobre la gestión.

En un memorándum de 1983 que reportaba una reunión con guardabosques y consejeros aborígenes, un miembro de alto rango del personal anotó la reacción de los aborígenes a las políticas del ANPWS:

> Fue interesante observar que el personal aborigen dice, casi unánimemente, que el personal europeo tiene demasiado "miedo" a quemar en el momento correcto […] [Dos aborígenes] hablaron largamente acerca de la necesidad de realizar quemas más extensivas. Otros apoyaron su preocupación general de que se les impedía quemar en el momento oportuno…

La mayoría del personal europeo justifica su cautela en términos de la necesidad de saber más sobre el ambiente y los peligros potenciales para los "hábitats delicados". Los aborígenes, en cambio, sostienen que el conocimiento ya existe —el conocimiento aborigen— y que la quema aborigen sirve en parte para el objetivo de proteger áreas como los bosques tropicales o los pantanos de corteza de papel. El punto de vista opuesto euro-australiano fue expresado por un guardabosques de distrito en un memorando sobre parques, de la siguiente manera:

> Me parece que hay tantos factores desconocidos en el conjunto de la cuestión que tal vez lo mejor sea que adoptemos un enfoque prudente. En el corto plazo siento que debemos mejorar nuestra capacidad de manejar el fuego en los arbolados abiertos y las tierras bajas contiguas a las llanuras aluviales antes de que empecemos a quemar este hábitat evidentemente delicado.

Todos los aborígenes (y algunos europeos) sostenían que el personal de ANPWS no hacía esfuerzo serio alguno para aprender sobre las prácticas contemporáneas o las denominadas tradicionales. Como respondió un anciano tribal a la pregunta de si el personal del parque le había pedido alguna vez que enseñara a los europeos sobre la quema:

> No, simplemente me dejan hacer mi propia quema. Pero no me observan cuando lo hago [cuando quemo]. Me dijeron que vendrían, pero no, no

> para ver cómo uso el fuego. Ellos lo hacen a su manera. Bueno, así son ellos. Pero yo sé algunas cosas que ellos no.

Aun cuando el personal del parque tiene una perspectiva más comprensiva sobre el rol del fuego que hace diez años, su comprensión del conocimiento ecológico tradicional aborigen y de las prácticas contemporáneas no parece haber cambiado. En gran parte, las bases para comprender las prácticas de quema tradicionales y contemporáneas de los aborígenes se derivan de la opinión euro-australiana de que los gagadju, como todos los aborígenes, han cambiado de manera fundamental. Es una opinión que equipara el conocimiento aborigen y la práctica. La posición del parque sobre cómo los gagadju han cambiado y en parte cómo ese cambio impactó en la participación algo limitada de los gagadju en las quemas controladas se expresó en el primer Plan de Gestión del Parque Nacional de Kakadu (ANPWS, 1980):

> Ya que la población aborigen que vive en el parque *no tiene la misma estructura* que en los tiempos previos al contacto, es probable que la mayoría de la quema controlada se llevara a cabo por parte del personal del parque u oficiales especialistas. Cuando sea posible, los aborígenes participarán en estos programas (ANPWS, 1980: 359).

Las afirmaciones acerca de los cambios en las costumbres, estilos de vida, cultura o, en este caso, la "estructura" se repiten en varios contextos. Las perspectivas europeas sobre la "cultura tradicional aborigen" y la emergencia históricamente reciente de lo que se llama con desdén "la cultura búfalo" son fundamentales para comprender cómo los euro-australianos definen la "naturaleza de la aboriginalidad" y cómo los aborígenes están involucrados, o no, en las actividades del manejo (Weaver, 1984).[4]

4 La designación "cultura de búfalo" refleja, en parte, el hecho de que hoy en día los aborígenes cazan el búfalo del agua (introducido desde Indonesia durante la primera mitad del último siglo), igual que el ganado (introducido por pastoralistas unos cincuenta años más tarde), todo esto en contraste con su dependencia anterior de los canguros y otras especies nativas. En términos de su significado más amplio y etnocéntrico, la etiqueta solo expresa la perspectiva europea en la que se señala que los aborígenes ya no son "tradicionales".

Se trata de una visión folclórica nacional australiana que subyace a las percepciones particulares que el personal del ANPWS tiene de los aborígenes en Kakadu; y no importa si los europeos simpatizan o no con los aborígenes. Un comentario en un memorándum del parque de 1981, "Un resumen del borrador de los lineamientos para el manejo del fuego", reafirma la posición de que la cultura aborigen ha cambiado y, en consecuencia, carece de importancia para las metas de manejo del parque en la quema de hábitats.

> Si bien es cierto que los aborígenes quemaban la tierra con frecuencia mucho antes de la llegada de los europeos, el patrón de la quema ha cambiado, sin duda, y hoy en día el *manejo del fuego* es de preocupación inmediata para Kakadu [Subrayado propio].

La opinión de que la cultura aborigen tradicional ha cambiado radicalmente justifica en parte la opinión de que la postura del ANPWS sobre las quemas es "ecológica" y que los aborígenes son "laissez faire" o "ad hoc" en sus planteamientos sobre las quemas. Los siguientes comentarios, tomados de varias entrevistas, reflejan la opinión general que tiene el personal euro-australiano de las perspectivas aborígenes y de los aborígenes mismos:

> Simplemente no podemos duplicar los métodos de fuego tradicionales aborígenes, que pueden haber sido lo mejor que la tierra haya visto jamás. Pero creo que eso se ha perdido con el tiempo.

> Un aborigen podría tener una perspectiva en relación con la disponibilidad de ñames o la atracción de canguros a zonas de hierba. Mientras que, si hablas con un ecologista que quizá esté interesado en la flora y fauna autóctonas en su conjunto, su perspectiva sería diferente. Supongo que el Servicio de Parques tendría que decidir qué perspectiva quiere seguir.

> Simplemente no sabemos suficiente acerca de la vegetación para poder decir si está mal o no, y yo suelo ver a través de ojos eurocéntricos [...] pero una persona aborigen lo verá a través de ojos aborígenes [...] Bueno, eso está bien desde una perspectiva humanista, pero desde la perspectiva ecológica, tal vez no.

> No actúan [los aborígenes] por motivos ecológicos. Es aquí donde el Servicio de Parques tiene que decidir. Quiere operar el parque desde una perspectiva ecológica o etnocéntrica. El problema es que los aborígenes no son tan disciplinados o tienen urgencia [acerca de la quema] como nosotros, son bastante permisivos y relajados al respecto.

Sin embargo, entre el personal europeo hay quienes critican lo que el parque no ha hecho para aprender de los aborígenes. Como afirmó un guarda europeo:

> Ya llevo [algunos] años aquí, estoy interesado en la gente aborigen y me llevo bastante bien, bastante bien, con toda la gente [aborigen] aquí. Pero aún no sé nada de lo que hacen con el fuego. Nunca les hemos pedido que nos lleven para mostrarnos lo que hacen. Siempre han sido los europeos sacando a los aborígenes para ayudar a los europeos a hacer la quema. Nunca ha sido al revés, nunca. No sé realmente cómo los europeos manejaron eso, la verdad.

> Un joven guardabosque aborigen se quejó de lo mismo. Recordando cómo recientemente había sido castigado por un miembro sénior del personal por realizar una quema un mes después de la "fecha oficial de cierre" (30 de julio), un incendio, afirmó que no había sido peligroso y que se apagó donde había anticipado; señaló que nadie del personal europeo le había preguntado jamás acerca de cómo realizaba los incendios. Él sentía que ellos pensaban que él no sabía nada acerca del uso del fuego. Desde su perspectiva, no pensaba que el personal europeo supiera mucho acerca de los incendios o los efectos del fuego.

Otro guardabosque europeo reportó cómo un propietario tradicional de tierra, un hombre joven, se quejó de las políticas del parque con respecto a la quema.

> Conozco hombres más jóvenes que han crecido en una situación tradicional de vida de campamento, y conozco uno en particular que dijo, sabiendo que no nos gustaría: "¡Al carajo! Yo conozco la manera correcta. Este es mi país y lo voy a quemar, les guste o no". Fue casi una forma de protesta contra nosotros.

El hecho de que la quema sea llevada a cabo o dirigida por aborígenes representa grandes problemas para la mayoría de los europeos. La crítica que hace el personal del ANPWS de las prácticas de quema como "no organizadas" es válida; como criticó un europeo, se practica desde una "base ad hoc". Hombres, mujeres e incluso niños provocan incendios cuando uno o varios de ellos se encuentran en zonas que necesitan ser quemadas según los conocimientos que poseen sobre hábitats concretos que se queman en épocas del año apropiadas (o casi apropiadas). Las consideraciones pueden incluir la de simplemente estar allí, incluso si es durante un momento menos que deseable o potencialmente perjudicial.

La quema también involucra derechos, en particular los derechos de los ancianos gagadju y sus responsabilidades de mantenimiento sobre áreas reconocidas. Lo que esto significa para hombres, mujeres y niños es que, en última instancia, ante los miembros más antiguos del clan, son responsables de los incendios que provocan, especialmente de los que ponen en peligro o dañan zonas de importancia totémica y de recursos (por ejemplo, las masas forestales monzónicas). También se da el caso de que los forasteros deben obtener permiso para quemar en zonas pertenecientes a otros grupos. Los asuntos de derechos y responsabilidades para la quema en Kakadu se han complicado por el hecho de que la mayoría de las quemas son llevadas a cabo por ANPWS, y antes de eso por administradores de estaciones ganaderas. Debido a los arreglos de arrendamiento entre el parque y los gagadju, el personal del ANPWS tiene "permiso" para quemar áreas extensas. Sin embargo, los aborígenes se oponen a que se les reprenda por quemar en el "momento equivocado" o a que se les diga que no deben quemar determinadas zonas. Consideran que tienen derecho a quemar y que conocen mejor la tecnología y la ecología del uso del fuego.

Para los aborígenes, la quema, como otras actividades de la subsistencia, es parte de la vida cotidiana. Como la caza de ualabíes o la recolección de ñames, se explica por los eventos del "tiempo del sueño" (*dreamtime*), ese corpus de mitos ontológicos que explica el pasado, el presente y el futuro (Stanner, 1979). Para los europeos, es un campo especial de investigación y un conjunto específico de actividades. En los dos planes de manejo del ANPWS, la quema se señala como un "problema de fuego" que involucra temas de investigación, seguridad, prevención, contención,

experimentación, monitoreo, formación, educación y enlace con otras agencias de gobierno (ANPWS, 1986: 37-39). Para los aborígenes, las prácticas de quema siempre han formado parte de la vida; para los europeos, implican una serie de "objetivos ecológicos".

Del mismo modo que las prácticas aborígenes se justifican mediante el "tiempo del sueño", las prácticas ANPWS están justificadas y racionalizadas por la ciencia. La justificación de las prácticas de manejo es integral a la idea de "profesionalismo". Dadas las metas de la ANPWS y la formación de miembros del personal europeos, este énfasis no sorprende mucho. De hecho, estudios recientes han subrayado la importancia de "computarizar el conocimiento" sobre la gestión de incendios. Como se describe en una publicación:

> Los administradores del magnífico Kakadu National Park ahora pueden consultar una computadora para predecir las consecuencias de liberar, o limitar, aquel potente agente de cambio, el fuego. Están usando FIRES (el sistema de expertos en fuegos), quizá el primer "sistema experto" instalado en una agencia de manejo ambiental (Bell, 1988: 3).

Sin embargo, incluso entre los europeos se reconocen problemas para relacionar los objetivos del profesionalismo con las creencias y prácticas tradicionales aborígenes. Como lo describe un guardabosque:

> Creo que estamos muy enganchados con esta cosa del profesionalismo en el manejo de los parques. Cada vez más cosas tienen que estar claramente delineadas, lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y las razones y justificaciones para ello. Este tipo de esquemas simplemente no encajan con las maneras en que los aborígenes usan el fuego. Los dos enfoques no son compatibles. Así que hay un gran cambio para parecer y ser vistos como profesionales en nuestra gestión ecológica del parque. Resulta difícil hacer encajar los intereses aborígenes, los intereses de manejo aborigen con eso.

Como ya se ha señalado, la quema aborigen sigue un modelo similar al de otros aspectos de su tecnología, pero no se organiza sobre la base de un "programa

de control de incendios" coordinado por un "oficial de control de incendios", que reserva un espacio determinado para la quema de incendios", o elaborando los informes apropiados. Para los aborígenes, la "organización de la quema" es tan extraordinaria como la organización de las actividades cotidianas de caza y recolección. En un sentido general, parece haber dos problemas: las preconcepciones que el personal europeo tienen acerca de la "aboriginalidad" y un fallo de comunicación.

Problemas

El rol que juegan los aborígenes en el manejo del fuego de los hábitats dentro de Kakadu es solo una dimensión de un sistema general de relaciones que involucra a los aborígenes y al personal euro-australiano de los parques. Los problemas inherentes a estas relaciones han sido objeto de un estudio en el que se compara Kakadu con el Parque Nacional Gurig, ubicado en la península Cobourg al norte de Kakadu, creado en 1981, y administrado por el CCNT (Weaver, 1984). El problema es en esencia la dificultad que tienen los europeos para comprender y aceptar la cultura y comportamiento aborigen.

Aborígenes y "aboriginalidad"

En el centro del problema de cómo se ve a los aborígenes yace lo que Weaver llama "la naturaleza de la aboriginalidad" (1984: 21-22), cuyas características definitorias son identificadas por el personal del parque y se basan en la visión popular de lo que han sido y lo que son los aborígenes. En este sentido, el personal del parque no considera que los ajustes históricamente recientes en los estilos de vida representan mucho de lo "tradicional". Al igual que otros australianos blancos tienden a ver la "cultura tradicional" en términos de los aspectos más visibles y materiales de la vida, en particular en cómo observan que los aborígenes han sido aculturados en sus estilos de vida, transporte, herramientas, vestimenta, etc., en lugar de los sistemas de conocimientos y creencias subyacentes que son los fundamentos de la cultura aborigen.

No es que los euro-australianos en Kakadu consideren que los aborígenes son culturalmente similares a ellos; son conscientes, por supuesto, de las diferencias culturales y conductuales entre su forma de vida y la de los aborígenes. Más bien, perciben los estilos de vida contemporáneos de los aborígenes como reliquias empobrecidas del pasado. Mientras que el personal euro-australiano se considera sensible a las condiciones de la vida aborigen, su visión de lo que representa lo genuinamente aborigen difiere de manera sustancial de lo que ha sido retratado por antropólogos sobre la dinámica de la vida comunitaria indígena en el norte de Australia.[5] Como lo describió un guardabosque:

> Tenemos que admitirlo: la vida aborigen no es lo que era. En el pasado podían cazar y pescar y quemar más o menos donde sea que estuvieran. Aunque algunas de las personas mayores pueden recordar las viejas costumbres, los jóvenes no, o así parece. Mira cómo viven ahora. Es muy diferente a lo que fue en su pasado prístino, pero esa parte de su cultura ya se fue para bien o para mal.

Este testimonio representa uno de los problemas básicos que tienen los euro-australianos para comprender lo que es "tradicional" y cómo eso se relaciona con lo que hacen los aborígenes en la actualidad. Se supone que las circunstancias de "cómo viven ahora" de alguna manera anulan la existencia o persistencia del conocimiento tradicional, en este caso, el conocimiento tradicional ecológico y tecnológico. De la misma manera que nosotros somos conscientes de que existen contradicciones entre el conocimiento ecológico y la práctica tecnológica en las sociedades modernas e industrializadas (por ej. el vertido de residuos tóxicos, la contaminación del aire, el uso de fluorocarburos, los aborígenes son conscientes de que algunas de las cosas que hacen ahora con respecto al ambiente y la explotación de los recursos no se ajustan del todo a los conocimientos ecológicos tradicionales.

5 Varios estudios han mostrado cómo las comunidades aborígenes han hecho frente a los cambios en las áreas del interior (Jones, 1980b; Meehan, 1982; Bell, 1983). Uno de los más importantes ha mostrado cómo los aborígenes abordan las condiciones en y cerca de Darwin, al emplear los mecanismos socioculturales más tradicionales (Sansom, 1980).

Por ejemplo, los aborígenes reconocen como un problema la reducción del acceso a zonas remotas en lo que antaño formaba parte de las rondas estacionales tradicionales, y el consiguiente inicio de incendios extensos y calurosos a finales de temporada cuando se visitan estas zonas. Si bien los aborígenes comprenden los problemas que plantea la quema insuficiente de zonas, también son conscientes de las formas tradicionales y preferibles de quemar, y aprecian en su totalidad las concesiones necesarias involucradas. Su "falta" o "incapacidad" de actuar no implica que ya no comprendan o aprecien las prácticas tradicionales.

Tanto para los aborígenes como para otros australianos la vida es una negociación cotidiana entre lo ideal y lo real, en especial en entornos sociales que sufren cambios rápidos. Las contradicciones inherentes entre creencias y acciones han frustrado a los antropólogos desde que se hicieron los primeros trabajos de campo, y la disyuntiva entre creencias y prácticas no es solo la prerrogativa de las naciones avanzadas, urbanas e industrializadas. Así, a pesar de las circunstancias actuales en Kakadu y otras áreas en Australia, el conocimiento tradicional aborigen sobre la quema aún se encuentra disponible.

El problema sigue siendo que la definición de lo que se considera como aborigen, y por extensión lo que es apropiado para las necesidades del manejo y conservación del parque, es definido por euro-australianos, no por aborígenes. Con respecto a cómo los aborígenes se relacionan con el ambiente, nada de lo que hacen es en realidad más tradicionalmente aborigen que el uso de los incendios de hábitat. No es de extrañar que estas prácticas sean las que más preocupan al personal del ANPWS.

Al mismo tiempo, trabajan para una agencia gubernamental que se compromete a "proteger y preservar el entorno natural". Así pues, no es sorprendente que, a pesar de un considerable interés científico por el papel de los incendios naturales y planeados (Gill *et al*., 1981), los guardabosques euro-australianos sigan mostrándose cautelosos y reticentes ante el uso intensivo y a gran escala del fuego, sobre todo por parte de los aborígenes, que no tienen "un punto de vista ecológico". Por supuesto, lo que los aborígenes hacen al "cuidar" y "limpiar" el paisaje con fuego en

gran parte evita justo aquellas cosas que preocupan más a los australianos blancos: la ocurrencia de tormentas de fuego y la destrucción de los tipos de hábitat más frágiles. Básicamente el punto de vista europeo es que el fuego es malo, pero *se puede utilizar* para fines buenos; el punto de vista aborigen es que el fuego es bueno y *debe utilizarse* a veces en condiciones que nos parecen extremas. Gran parte del problema que tienen los euro-australianos para comprender las prácticas aborígenes se deriva de las perspectivas "etnocéntricas" que las sociedades industrializadas mantienen con respecto a las tecnologías de las sociedades no industrializadas.

Tecnología como conocimiento

Como otros individuos, los australianos perciben a las "sociedades primitivas" como poseedoras de tecnologías simples. Es una perspectiva folclórica que equipara herramientas y tecnología. Dado que tradicionalmente los aborígenes disponían de pocas herramientas, se suele decir que poseían la más simple de las tecnologías. Esta visión también es compartida por muchos antropólogos. Recientemente Testart (1988: 12) ha afirmado que "el equipo de un cazador australiano es [...] notable por ciertas deficiencias. Australia perpetuó en cierto sentido la etapa técnica del Paleolítico". Sin embargo, si se considera que la tecnología es conocimiento, *un conocimiento que la gente utiliza con fines productivos*, entonces hay mucho más que lanzas, bumeranes o formas de utilizar la tecnología. Como ha escrito Riddington (1982: 471) acerca de los cazadores-recolectores en general:

> Quizá porque nuestra cultura está obsesionada con la producción, el intercambio y la posesión de artefactos, pasamos por alto el artificio de la tecnología en favor de los artefactos que produce [...] Sugiero que se debe entender la tecnología como un sistema de conocimiento más que un inventario de objetos [...] La esencia de la estrategia adaptativa de caza y recolección es conservar información sobre las posibles relaciones entre las personas y el entorno natural, y poder actuar en consecuencia. Cuando se materializan estas relaciones que dan vida son tan artefactos de la tecnología de la caza y la recolección, como los objetos materiales que las hacen posibles.

Por extensión, el punto que se necesita destacar en la definición de Riddington es que el conocimiento tecnológico que subyace al uso de las herramientas, con independencia del hecho de que las herramientas hayan cambiado, puede seguir siendo razonablemente coherente en cuanto a lo que la gente entiende sobre los procesos ambientales y los efectos que tienen sobre ellos. El conocimiento de los aborígenes sobre las preferencias de alimentación de los animales, las distribuciones diurnas y estacionales, los ciclos reproductivos, los comportamientos sociales, las relaciones depredador-presa, las cadenas alimenticias y la sucesión ecológica no se descartaron ni se volvieron irrelevantes porque las armas sustituyeran a las lanzas, porque los aborígenes se hayan vuelto menos nómadas que en el pasado o porque los alimentos almacenados constituyan una parte sustancial de su dieta. Como lo demuestran en Australia y en otras partes los numerosos estudios sobre las sociedades de cazadores-recolectores, a pesar de los cambios en las circunstancias, los recolectores continúan manteniendo una comprensión detallada de cómo explotar los sistemas naturales, así como de los efectos, los impactos ecológicos que sus actividades tienen en una variedad de sistemas naturales.

Como un aspecto del cambio tecnológico, los aborígenes ahora tienen acceso a encendedores de butano y vehículos todoterreno, y, antes de eso, a cerillas y caballos. Sin embargo, las herramientas nuevas no significan que su conocimiento tecnológico de cómo puede ser empleado y controlado el fuego, o su comprensión ecológica de sus efectos variados en diferentes hábitats, haya sido fundamentalmente cambiado u olvidado. Mientras las prácticas tradicionales sean recordadas y empleadas con regularidad en diversos grados, la tecnología del fuego puede permanecer relativamente inalterada, aunque sus aplicaciones sean más limitadas que en el pasado.[6] Sin embargo, aunque los aborígenes son mucho más sedentarios y no afectan a zonas más alejadas con tanta frecuencia o en el mismo grado que en el pasado, sus conocimientos sobre el uso del fuego y su comprensión de los resultados variables de la quema son, no obstante, coherentes con lo que

6 Entre poblaciones nativas en el norte de Alberta, donde las prácticas tradicionales de quema han sido prohibidas durante varias décadas, el conocimiento tradicional tecnológico y ecológico sobre prácticas de quema aún prevalece, a pesar de esfuerzos más efectivos de prevención de incendios por parte del gobierno (Lewis, 1977; 1982a).

es "tradicional". Suponer que las tecnologías ahora son fundamentalmente diferentes porque se usan barras de acero como palos de cavar y armas de fuego para cazar sería atribuir demasiada importancia a los artefactos y demasiado poca a las ideas, las ideas que la gente aplica para conseguir metas tecnológicas y afectar las condiciones ecológicas.

La opinión de que la tecnología aborigen era simple y ahora, como resultado de factores de aculturación, ha cambiado fundamentalmente se afirmó en un documento de debate sobre el Parque Kakadu escrito por un científico de la Northern Territory Parks and Wildlife Commission, haciendo referencia al "movimiento de las estaciones ganaderas",[7] por medio del cual los aborígenes han establecido asentamientos y demandas sobre tierras tribales. El escritor presenta una perspectiva empática pero ingenua de la situación; no es un punto de vista que considere el movimiento de deslocalización como representativo de la tradición aborigen.

> El retorno a las prácticas tradicionales es muchas veces más aparente que real […] ya que estos ranchos mantienen vínculos vitales con el asentamiento mayor para los suministros esenciales. La población es altamente móvil y utilizan la tecnología del siglo XX en su explotación del paisaje. Los ranchos son con frecuencia réplicas en miniatura de los asentamientos más grandes y no representan un retorno a los antiguos estilos de vida nómadas.

La afirmación de que los aborígenes ahora "utilizan la tecnología del siglo XX para explotar el paisaje" refleja una vez más el etnocentrismo inconsciente según el cual la tecnología es equiparada a las herramientas. No es un punto de vista que incluya el conocimiento, al menos no el conocimiento de los aborígenes y otros pueblos "primitivos", como una dimensión importante de la tecnología, y por tanto ignora las complejidades de las tecnologías con las que aún explotan y manejan sus ambientes. Es una perspectiva de las sociedades industrializadas que les impide comprender

7 El establecimiento de "rancherías" o "homelands" ha sido comentado ampliamente por parte de antropólogos australianos, y ha sido cubierto, en general de manera desfavorable, por la prensa popular. Como señalan Meehan y Jones (1980), al describir una "reacción blanca" a su establecimiento, muchos australianos han reaccionado de forma negativa frente a las implicaciones del movimiento de rancherías.

las tecnologías de los pueblos que no dependen de grandes inventarios de máquinas y herramientas.

Conclusión

Como resultado de lo que se ha conseguido en Kakadu, Uluru (Ayers Rock), Gurig y otras áreas en varias etapas de planificación y desarrollo, Australia ha ocupado un lugar destacado en el desarrollo de programas innovadores que involucran a los pueblos indígenas en la operación y manejo de los parques. Aunque ha habido y sigue habiendo problemas, el experimento ha tenido un éxito notable en el ámbito comunitario. En Kakadu, en gran parte gracias a los esfuerzos conscientes de los principales funcionarios del parque y a los contactos cotidianos entre guardabosques y aborígenes, las relaciones interétnicas han estado en general "exentas de hostilidad, desconfianza y de relaciones de confrontación evidenciadas en muchas otras partes a nivel local" (Weaver, 1984: 5). ¿Cuál es entonces la base de los malentendidos entre los europeos y los aborígenes acerca de los usos de incendios de hábitat? El problema no es solo que los europeos y los aborígenes representan dos tradiciones muy diferentes respecto al rol y significado de los incendios ambientales. Como se ha visto recientemente, las actitudes europeas en Kakadu ya han cambiado desde 1984 (Braithwaite, 1985; 1987a; 1987b; Braithwaite y Estbergs, 1985; Press, 1987; 1988); el uso del fuego por parte de los ganaderos es un ejemplo mucho más antiguo de cómo cambiaron los puntos de vista euro-australianos.

Tanto los ganaderos como los guardabosques tienen problemas para reconocer la lógica y la eficacia de las prácticas aborígenes originales de quema cuando se contrastan con las suyas. Para los ganaderos, la medida de la eficacia en el uso de incendios de hábitat depende de si las prácticas afectan positiva o negativamente las metas pastoriles: los prados y el ganado. En este sentido, son aún más críticos con lo que consideran prácticas gubernamentales "equivocadas" y "estúpidas" que, con las prácticas de los aborígenes, ya que los organismos gubernamentales son en potencia mucho más amenazadores que los aborígenes, que de vez en cuando provocan incendios en los "momentos equivocados" y en los "lugares equivocados".

El significado ecológico del manejo tradicional del fuego por parte de los aborígenes en Kakadu es reconocido por los científicos (Braithwaite, 1985; 1987a; 1987b; Braithwaite y Estbergs, 1985; 1987; Davis *et al*., 1988; Press, 1987; 1988a), así como se reconocen otras prácticas indígenas en el resto de Australia (Gill *et al*., 1981). Sin embargo, la justificación científica de las prácticas tecnológicas y el conocimiento ecológico de los gagadju se basa más en su similitud con otros cazadores-recolectores que en lo que las ciencias ambientales han podido verificar. Desde un punto de vista comparativo, los patrones de quema utilizados por los gagadju muestran notables paralelismos con lo que se conoce sobre los usos del fuego por parte de los cazadores-recolectores en otras partes de Australia y del mundo (Hallam, 1985; Lewis, 1982b; Lewis y Ferguson, 1988).

Para la mayoría del personal del ANPWS —como para la mayoría de la gente en los países occidentales— la eficacia de la "ciencia", como una abstracción cultural distinta del trabajo que realmente hacen los científicos, deriva de su propia justificación como un tipo de estatuto para las creencias y las acciones. Es culturalmente similar, aunque mucho menos omnipresente, al concepto del "dreamtime" para los aborígenes: "Una narrativa de cosas que ocurrieron una vez" y "un estatuto de cosas que aún ocurren" (Stanner, 1979: 24). En términos de la comprensión del "mundo real", las explicaciones científicas, aunque están basadas en un conocimiento científico limitado o simplemente en la práctica tecnológica, se consideran superiores a las explicaciones tradicionales, con independencia de que el conocimiento indígena puede estar relacionado directamente con adaptaciones de largo plazo. Los conocimientos ecológicos tradicionales de los aborígenes en materia de gestión ambiental permanecen ocultos a los europeos no porque los aborígenes los oculten, sino porque para el personal del ANPWS no tiene "base científica" ni ha sido "verificado".

Es muy difícil para las personas de culturas "avanzadas" aceptar la idea de que las personas de culturas "primitivas" pueden saber algo científicamente significativo o incluso saber más que los científicos acerca de un tema dentro del campo de las ciencias naturales, en este caso la ecología del fuego. La ciencia indígena o "popular" solo llega a conocerse, si es que llega a conocerse, cuando es verificada y más o menos correlacionada con

lo que descubren los científicos. Para los gagadju, aprender del ANPWS que la ciencia está demostrando la importancia de la quema controlada en entornos en los que ellos y sus antepasados han prendido fuego durante miles de años es análogo a que les digan que Australia fue descubierta por europeos y admitir que los aborígenes ya vivían allí.

Weaver ha señalado el problema que supone en Kakadu y Gurig que los europeos acepten los conocimientos aborígenes en relación con la gestión de los recursos.

> Creo que el deseo de incorporar los conocimientos tradicionales aborígenes es loable y genuino, pero que se producirá, en principio, más fácilmente en la interpretación que en la gestión de recursos y operaciones del parque […] Creo que el conocimiento aborigen no será fácilmente aceptable para los europeos con un sistema científico de justificación del conocimiento. La gestión de la tierra es una incorporación parcial de los conocimientos aborígenes, pero que está racionalizado y validado por el enfoque científico y, por tanto, vulnerable a los nuevos descubrimientos de la investigación que podrían contradecir los conocimientos actuales (Weave, 1984: 20).

El problema al que Weaver se refiere no es solo australiano, por supuesto. La falta de consciencia o aceptación de los sistemas populares de conocimiento ecológico caracteriza sin duda las perspectivas de la mayoría de los científicos occidentales. Un problema similar ha existido durante mucho más tiempo en el campo de la medicina popular, donde las prácticas indígenas, después de ser modificadas, a veces eran aceptadas por los científicos médicos, pero sin comprender ni reconocer las percepciones culturales de lo que suponían (Price, 1939; Vogel, 1970). Al mismo tiempo, pero por razones diferentes, los antropólogos no han tenido mucho más éxito en la identificación de los sistemas indígenas de conocimiento ecológico, más frecuentemente han hecho hincapié en las taxonomías populares. Con pocas excepciones, los antropólogos han ignorado el conocimiento tradicional ecológico que usan las personas para comprender y actuar sobre los sistemas de causa y efecto ambiental (Blurton y Konner, 1976; Lewis, 1982a; Nelson, 1969; 1973; 1983). Al escribir sobre las comprensiones ecológicas de pescadores de Palau

en Micronesia, Robert E. Johannes (1981: 9), un ecologista marino, ha señalado:

> Los científicos naturales con frecuencia han pasado por alto los conocimientos prácticos que poseen los artesanos […] Es una manifestación del elitismo y etnocentrismo que impera en gran parte de la comunidad científica occidental.

Como ya se ha mencionado, existe la complicación añadida de que los euro-australianos consideran que la tecnología aborigen es, por un lado, sencilla y, por otro, que ha cambiado drásticamente después del contacto con el "mundo moderno". Al mismo tiempo, los europeos abordan los conocimientos de los aborígenes sobre los incendios de hábitats como si fueran comprensibles en términos de *por qué* los aborígenes quemaban, pero sin comprender la percepción aborigen de cuáles son las *consecuencias* de las quemas. Como han demostrado este y otros estudios, las percepciones aborígenes de los múltiples sistemas de las relaciones de causa-efecto son más complejas tecnológicamente y más significativas en el aspecto ecológico que el mero hecho de saber que los incendios se provocan para mejorar la caza, mantener el paisaje limpio, mejorar el crecimiento de los ñames, limpiar un área de las serpientes, o solo por el puro placer de hacerlo. La razón por la que un aborigen quema un bosque abierto o una franja de pastos de llanura aluvial es mucho menos importante o interesante que su percepción de los procesos ecológicos que intervienen en la quema (Lewis, 1985a).

De la misma manera que muchos aborígenes aún entienden mucho acerca de la ecología de plantas y animales, muchas personas mayores, incluso muchos jóvenes comprenden la ecología del fuego, una comprensión que tiene vínculos directos y un alto grado de integridad con los conocimientos ecológicos tradicionales. A menos que se haga un esfuerzo consciente por aprender *de* los aborígenes en lugar de limitarse a aprender *sobre* los aborígenes, el ANPWS seguirá privándose de sistemas importantes y bien desarrollados de conocimientos ecológicos y tecnológicos tradicionales. Dado que los aborígenes siguen conociendo una serie de sistemas ambientales y muchos de sus procesos ecológicos, los gagadju aún pueden realizar contribuciones importantes para

las metas de conservación y las prácticas del manejo del Australian National Parks and Wildlife Service en Kakadu.

Reconocimientos

La financiación para el trabajo en el territorio del norte (abril-agosto, 1983) provino del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. La investigación inicial (junio-julio, 1980) fue financiada con una beca del Australian Institute of Aboriginal Studies. Adicionalmente, la asistencia logística y administrativa fue proporcionada por la North Australian Research Unit (Australian National University), Darwin. La ayuda adicional fue proporcionada por el Australian National Parks and Wildlife Service. En un sentido más personal, estoy en deuda con Chris Haynes y muchos de los residentes y empleados en el Kakadu National Park.

Referencias

ANPWS (Australian National Parks and Wildlife Service). 1980. *Kakadu National Park Plan of Management*. Commonwealth of Australia.

ANPWS. 1986. *Kakadu National Park. Plan of Management*. Commonwealth of Australia.

Bell, A. 1988. Fire and computers of Kakadu. *Ecos*, *55*, 3-8.

Bell, D. 1983. *Daughters of the dreaming*. George Allen and Unwin

Blurton Jones, N. y M. J. Konner. 1976. Kung knowledge of animal behavior. En R. B. Lee e I. Devore (coords.). *The proper study of mankind is animals* (325-348). Harvard University Press.

Braithwaite, R. W. 1985. *The Kakadu fauna survey: an ecological survey of Kakadu National Park*. Report to ANPWS, Canberra.

Braithwaite, R. W. 1987a. Effects of fire regimes on lizards in the wet-dry tropics of Australia. *Journal of Tropical Ecology*, 3, 265-275.

Braithwaite, R. W. 1987b. The biological value of Kakadu National Park. *Search*, *18*, 296-301.

Braithwaite, R. W. y J. A. Estbergs. 1985. Fire patterns and woody vegetation trends in the alligator rivers region of Northern Australia. En J. C. Tothill y J. J. Mott (coords.). *Ecology and management of the world's savannas* (359-364). Australian Academy of Science.

Braithwaite, R. W. y J. A. Estbergs. 1987. Fire birds of the Top End. *Australian Natural History*, *22*, 299-302.

Davis, J. R., P. M. Nanninga, J. R. L. Hoare y A. J. Press. 1988. *Transferring scientific knowledge to natural resource managers using artificial intelligence concepts* [manuscrito inédito].

Ellen, R. 1982. *Environment, subsistence, and system*: *the ecology of small-scale social formations*. Cambridge University Press.

Ember. C. R. y M. Ember. 1988. *Cultural anthropology. Englewood cliffs*. Prentice Hall.

Fox. R. E. 1981. *Some practical aspects of fire policy formulation* [manuscrito inédito].

Gill, A. M. 1981. Post-settlement fire history in Victorian landscapes. En A. M. Gill, R. H. Groves e I. R. Noble (eds.). *Fire and the Australian biota* (pp. 77-98). Australian Academy of Science

Gill, A. M., e I. R. Noble. 1986. *Bibliography of fire ecology in Australia*. CSIRO Division of Plant Industry. (Available on CSIRO VAX 11/730 minicomputer.)

Gill, A. M., R. H. Groves, e I. R. Noble (eds.). 1981. *Fire and the Australian biota*. Australian Academy of Science.

Hallam, S. J. 1985. The history of aboriginal firing. En J. R Ford (coord.). *Fire ecology and management in Western Australian ecosystems* (pp. 7-20). WAIT Environmental Studies Group Report No. 14. Western Australian Institute of Technology.

Haynes, C. D. 1982. Man's firestick and god's lightning: bushfire in Amhemland. Paper presented to the *ANZAAS 52nd Congress*. Sydney, New South Wales

Haynes, C. D. 1985. The pattern and ecology of Munwag: traditional aboriginal fire regimes in North Central Arnhemland. Proceedings. *Ecological Society of Australia*, *13*, 203-214.

Horton, D. R. 1982. The burning question: the aborigines, fire and Australian ecosystems. *Mankind*, *13*, 237-257.

Johannes, R. E. 1981. *Words of the lagoon: fishing and marine lore in the palau District of Micronesia.* University of California Press

Jones, R. 1975. The Neolithic, Palaeolithic and the hunting gardeners: man and land in the antipodes. En R. P. Siuggate y M. M. Cresswell (coords.). *Quaternary studies* (21-34). Royal Society of New Zealand.

Jones, R. 1980a. Cleaning the country: the Gidjingali and their arnhemland environment. *BHP Journal*, *1*, l0-15.

Jones, R. 1980b. Hunters in the Australian coastal savanna. En D. R. Harris (coord.). *Human ecology in savanna environments* (107-146). Academic Press.

Lewis, H. T. 1977. Maskuta: the ecology of Indian fires in Northern Alberta. *Western Canadian Journal of Anthropology*, *7*, 15-52.

Lewis, H. T. 1982a. *A time for burning.* Occasional Publications núm. 17. Boreal Institute for Northern Studies, University of Alberta.

Lewis, H. T. 1982b. Fire technology and resource management in aboriginal North America and Australia. En N. M. Williams y E. S. Hunn (coords.). *Resource managers: North American and Australian hunter-gatherers* (45-67). AAAS Selected Symposium No. 67. Westview Press

Lewis, H. T. 1985a. Why Indians burned: specific versus general reasons. En J. E. Lotan, B. M. Kilgore, W. C. Fischer y R. W. Mutch (coords.)- *Proceedings, symposium and workshop on wilderness*

fire (75-86). Intermountain Forest and Range Experiment Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture.

Lewis, H. T. 1985b. Burning the "top end": kangaroos and cattle. En J. R. Ford (coord.). *Fire ecology and management in Western Australian ecosystems* (21-32). WAIT Environmental Studies Group Report No. 14. Western Australian Institute of Technology.

Lewis, H. T. y T. A. Ferguson. 1988. Yards, corridors, and mosaics: how to burn a boreal forest. *Human Ecology*, *16*, 57-77.

Luke, R. H. y A. G. McArthur. 1977. *Bushfires in Australia*. Australian Government Publishing Service.

Meehan, B. 1982. *Shell bed to shell midden*. Australian Institute of Aboriginal Studies.

Meehan, B. y R. Jones. 1980. The outstation movement and hints of a white backlash. En R. Jones (coord.). *Northern Australia: options and implications* (131-157). Research School of Pacific Studies, Australian National University.

Nelson, R. K. 1969. *Hunters of the northern ice*. University of Chicago Press.

Nelson, R. K. 1973. *Hunters of the northern forest*. University of Chicago Press.

Nelson, R. K. 1983. *Make prayers to the raven*. University of Chicago Press.

Odum, E. 1983. *Basic ecology.* Saunders College Publications.

Press, A. J. 1987. Fire management in Kakadu National Park: the ecological basis for the active use of fire. *Search*, *18*, 244-248.

Press, A. J. 1988a. Comparisons of the extent of fire in different land management systems in the top end of the northern territory. *Proceedings. Ecological Society of Australia*, *15*, 167-175.

Press, A. J. 1988b. *Fire management for conservation: plans for practice in a fire prone environment* [manuscrito inédito].

Price, W. A. 1939. *Nutrition and physical degeneration*. P. B. Hoeber.

Riddington, R. 1982. Technology, world view, and adaptive strategy in a northern hunting society. *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, *19*, 469-481.

Sansom, B. 1980. *The camp at Wallaby Cross: aboriginal fringe dwellers in Darwin*. Australian Institute of Aboriginal Studies.

Stanbury, P. 1981. *Bushfires: their effect on Australian life and landscape*. Macleay Museum, University of Sydney.

Stanner, W. E. H. 1979. *White man got no dreaming: essays 1938-1973*. Australian National University Press.

Stewart, O. C. 1951. Burning and natural vegetation in the United States. *Geographical Review*, *41*, 317-320.

Stewart, O. C. 1954. The forgotten side of ethnogeography. En R. F. Spencer (coord.). *Method and perspective in anthropology* (221-248). University of Minnesota Press

Stewart, O. C. 1955. Fire as the first great force employed by man. En W. L. Thomas (coord.). *Man's role in changing the face of the Earth* (115-133). University of Chicago Press.

Testart, A. 1988. Some major problems in the social anthropology of hunter-gatherers. *Current Anthropology*, *29*, 1-31.

Vogel, V. J. 1970. *American Indian medicine*. University of Oklahoma Press.

Weaver, S. M. 1984. *Progress report: the role of aboriginals in the management of Cobourg and Kakadu National Parks* [manuscrito inédito].

17. Siguiendo a la vegetación invasora en la India, o por qué nuestros paisajes nunca han sido modernos[1]

Paul F. Robbins

En los últimos años, los geógrafos y otros estudiosos del cambio de uso de suelo y del cambio de la cobertura de suelo han tenido dificultades para comprender las rápidas transformaciones de los paisajes a su alrededor. Aunque los investigadores siguen observando patrones de cambio en la cubierta vegetal bien conocidas y generalizadas, muchas tendencias globales, como la desertificación y la deforestación, son cada vez más objeto de escrutinio y reevaluación. Donde las tierras áridas deberían colapsar debido al sobrepastoreo, estas se recuperan en largos ciclos de cambio (Behnke y Scoones, 1993). Donde la deforestación debería ocurrir posterior a talas perniciosas, los bosques se expanden con las poblaciones (Fairhead y Leach, 1996). Donde el cambio demográfico debería disminuir la intensidad de la agricultura, a veces el resultado es lo contrario (Wiegers *et al*., 1999). Debido a "la gran variación en las dinámicas (uso del suelo/cubierta vegetal) en los distintos entornos físicos y sociales", aún es difícil establecer patrones claros (Turner *et al*., 1995: 12). Esto es especialmente cierto para el caso de los paisajes afectados por la modernidad [véase más adelante una explicación de "modernidad"].

[…]

La investigación descrita en este artículo evalúa las cuestiones anteriores a partir de un estudio de caso en la India semiárida, donde los esfuerzos de manejo gubernamentales han transformado las prácticas tradicionales de uso de la tierra en un periodo relativamente corto. El trabajo parte de la tradición emergente del análisis de cambio/uso de suelo (LUCC) en geografía, y de su

1 Publicado originalmente en: Paul F. Robbins, 2001, "Tracking invasive land covers in India, or why our landscapes have never been modern", *Annals of the Association of American Geographers*, 91(4): 637-659.

preocupación por las tendencias globales del cambio en la cobertura de suelo (Meyer y Turner, 1994; Turner y Meyer, 1991; Turner *et al*., 1993; 1995) y de la ecología política, con sus cadenas transversales de explicación del cambio ambiental (Blaikie, 1985; Blaikie y Brookfield, 1987; Turner, 1999). La investigación utiliza datos de imágenes satelitales, comparadas en pares, así como datos históricos, información sobre la producción de las unidades familiares y el discurso de los planificadores y expertos del Gobierno para analizar el cambio en la región de Godwar, en Rajastán. El estudio de los paisajes producto de la intensificación, la conservación y la preservación simultáneas del paisaje permite evaluar los efectos ambientales de la planificación moderna a escala regional.

Este estudio demuestra que, desde hace tiempo, las prácticas de uso de suelo en la región integran los bosques no intervenidos con tierras en barbecho en la producción agrícola y pastoril. Estos paisajes, calificados de "naturales" o "silvestres", son vistos desde hace mucho como independientes de los paisajes sociales de producción. Siguiendo esta lógica, los planificadores del Estado han intentado gestionar y desarrollar estos espacios mediante el establecimiento de reservas forestales, la intensificación de las tierras de barbecho y la introducción de parcelas de conservación de árboles […]. A pesar de estos esfuerzos —y, de hecho, *debido a* ellos—, formas híbridas e "impuras" de cobertura vegetal, que mezclan rasgos sociales y naturales, han proliferado por todo el paisaje.

La región de Godwar

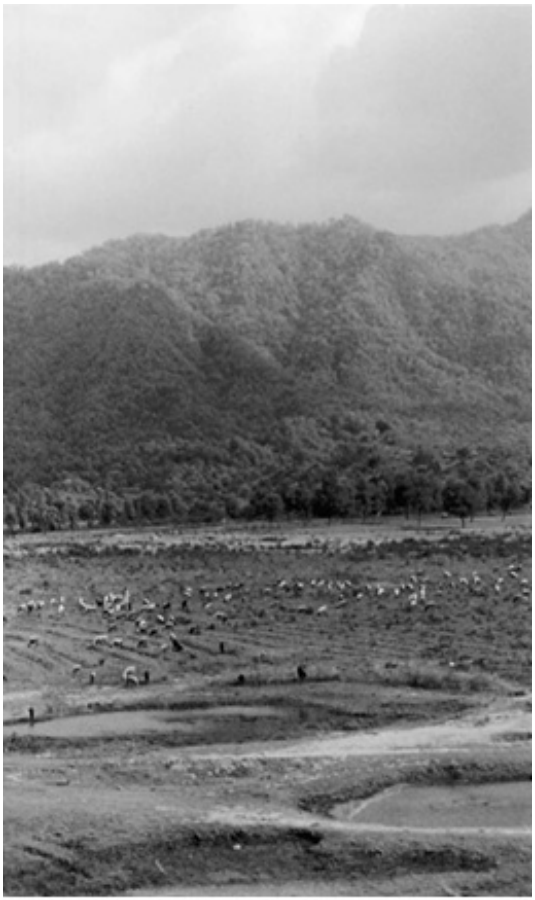
Godwar es el nombre tradicional de un rico cinturón agrícola que se extiende en la cara norte de las colinas Aravalli en la India (Figuras 1 y 2). El término hace referencia a la parte más sureña del distrito de Pali, en Rajastán [...] donde las precipitaciones relativamente abundantes, los altos niveles de aguas subterráneas y una escorrentía superficial constante se combinan para sostener una agricultura de riego intensiva. La zona boscosa de las colinas comprende un bosque tropical caducifolio semiárido, verde todo el año a pesar de los periodos de estrés hídrico extremadamente secos, dominado por *Anogeissus péndula* en asociación con *Butea monosperma* y *Ziziphus nummularia* (Jain,

1992). Las llanuras de las tierras bajas comprenden un ecosistema de pastizales de matorral dominados por gramíneas, especialmente *Cenchrus spp* y *Cynadon dactylan*, y árboles tolerantes a la sequía, como *Prosopis cineraria* y *Acacia nilótica*. Desde la época precolonial, la región ha sido reconocida como importante incluso para zonas distantes debido al escurrimiento que proporciona. Además, su ventajosa localización la ha convertido en escenario de intensos esfuerzos para el desarrollo. Entre ellos figuran la silvicultura de preservación a gran escala, como el área cerrada del Santuario de Vida Salvaje de Kumbhalgarah, y la intensificación agrícola promovida por el Estado, que se traduce en la instalación de presas medianas y en la construcción de pozos subvencionados. Godwar es, por tanto, un excelente ejemplo de los efectos de la modernización, entendida como un proceso de racionalización, optimización y compartimentalización, en un paisaje rural.

Figura 1. Zona de estudio al sur de Rajastán (India).



Figura 2. La región de Godwar, en la cara norte de las colinas de Aravalli. La espesa cubierta forestal termina abruptamente en las llanuras, donde la producción agro pastoril comercial prevalece desde hace tiempo.



La economía agraria

Aunque ubicados en los márgenes de la cuenca salina del río Luni, los agricultores de la zona cultivan dos y tres ciclos en sus tierras desde principios del siglo XIX [...] Debido a la reforma agraria y a las continuas subdivisiones entre

herederos varones, la mayoría de las parcelas del distrito de Pali tienen un tamaño de entre media y cuatro hectáreas (Gobierno de la India, 1995a; 1998) [...] No solo se cultiva durante el monzón (*kharif)*, de julio a octubre, sino también en la temporada seca, entre noviembre y febrero, cuando se depende del riego (*rabí*) y los elevados aportes de agua y mano de obra producen excedentes de cultivos comerciales [...].

Producción forestal y barbecho

A pesar de su larga tradición en la producción de cultivos comerciales, la ecología agrícola continúa firmemente arraigada al bosque y depende en gran medida de los subsidios ecológicos que las especies no domesticadas aportan a la producción. Los frutos del bosque, las cortezas medicinales, los árboles forrajeros y los pastos no solo complementan la producción intensiva de las unidades familiares, sino que la posibilitan. De hecho, en las explotaciones agrícolas altamente capitalizadas, con tractores modernos y uso de fertilizantes comerciales, la recolección de productos forestales es esencial. La principal fuente de fertilizantes continúa siendo la que proviene de los nutrientes del bosque como el estiércol de oveja y cabra, que se recoge mediante el pastoreo diario en las colinas boscosas. Incluso los hogares con acceso a clínicas y mercados dependen del bosque para obtener algunas especies medicinales, y las especies forestales también proporcionan los principales insumos para la construcción doméstica (Robbins, 2000). La Tabla 1 muestra las especies no domesticadas utilizadas de forma habitual en los hogares locales y señala el porcentaje de los 139 entrevistados locales muestreados aleatoriamente que las consideran importantes para la producción. De las veintiocho [...] especies no domesticadas [...] utilizadas con regularidad y recolectadas por más de 15% de los entrevistados [...] todas menos cinco se encuentran en el bosque, y catorce se encuentran sólo allí. De las catorce especies arbóreas más utilizadas, más de la mitad se encuentran y recolectan exclusivamente en el bosque.

Tabla 1. Especies no domesticadas ampliamente utilizadas.

Especie	Nombre del local	Barbecho	Bosque	Tipo	Porcentaje de encuestados
Acacia nilotica	Deshi Babul	✔		T	89.21%
Azadirachta indica	Neem	✔		T	78.42%
Ziziphus nummularia	Bordi		✔	T	65.47%
Prosopis juliflora	Angrezi Babul	✔		T	60.43%
Cynodon dactylon	Dob	✔		G	55.40%
Anogeissus pendula	Dav		✔	T	53.24%
Dactyloctenium aegyptium	Manchio	✔	✔	G	47.48%
Butea monosperma	Palas		✔	T	38.85%
Acacia senegal	Khumbat		✔	T	38.13%
Bauhinia racemosa	Enro		✔	T	34.53%
Dendrocalamus strictus	Bhas		✔	G	32.37%
Cenchrus spp.	Dhaman		✔	G	32.37%
Cyperus bulbosus	Siyo	✔	✔	G	32.37%
Albizia lebbeck	Saress		✔	T	28.06%
Urochloa panicoides	Kuri	✔		G	26.62%
Tamarindus indica	Imli		✔	T	25.90%
Boswellia serrata	Salar		✔	T	25.90%
Commelina benghalensis	Bokno	✔	✔	G	24.46%
Trianthema portulacastrum	Sato	✔	✔	G	24.46%
Dicanthium annulatum	Kald	✔	✔	G	23.74%
Acacia catechu	Khair		✔	T	23.74%
Prosopis cineraria	Khejri	✔	✔	T	20.86%
Oryza sativa	Sawa	✔	✔	G	20.86%
Digitaria ciliaris	Tarai		✔	G	18.71%
Ficus religiosa	Pipal	✔	✔	T	18.71%
Aristida spp.	Lamp		✔	G	16.55%
Heliotropium rariflorum	Karzino	✔	✔	G	15.83%
Echinochloa frumentacea	Bangti		✔	G	15.11%

* G = especie de árbol o arbusto;
T = especie de pasto o hierba.

Los que aparentan ser maleza, también son cruciales para la producción sostenida de capital en la región. La rotación frecuente de las tierras agrícolas ha mantenido a lo largo de la historia una proporción significativa de la tierra en barbecho anual. Además, incluso cuando los campos son cultivados, suelen contener valiosas especies silvestres de arbustos y hierbas que fijan el suelo, aportan insumos a la producción pastoril y se recolectan para obtener madera, forraje y medicinas (Figura 3). Así, el bosque y el barbecho (Figura 4) constituyen históricamente el eje de una agroecología semicapitalizada, y el paisaje se ha producido por medio de

la difuminación de las fronteras entre lo que la historia natural occidental suele describir como "natural" y lo que comúnmente se entiende como "social".

Figura 3a. Mujeres cosechando forraje en tierras de barbecho; estas hierbas, especialmente Cynodon dactylon y Cenchrus spp., son un insumo clave en la producción doméstica.



Figura 3b. Pastores con un gran rebaño de cabras adentrándose en el bosque.



Figura 4. Bosques y barbechos en la producción capitalizada.



Esto no quiere decir que el sistema de producción de Godwar es de alguna forma prístino. Para lograr la producción actual son necesarias transformaciones significativas del paisaje, tanto intencionales como no intencionales. En los campos en barbecho crece una combinación cuidadosamente controlada de especies herbáceas silvestres. El bosque es producto del manejo a largo plazo de los incendios, la caza y la tala. Esto tampoco quiere decir que el sistema sea "tradicional" o ahistórico. La rueda persa, que antaño elevaba agua para el riego, procede del Oriente Medio prehistórico (Beaumont, 1989), y el maíz, el núcleo tradicional del sistema de producción de cultivos comerciales, no es anterior al encuentro colombino.

Cambio de uso de suelo: conservación e intensificación

Este sistema de uso del suelo ha sufrido transformaciones, en particular en los últimos quince años. El objetivo central de los planificadores ha sido ampliar e intensificar las actividades agrícolas mediante un esfuerzo altamente subsidiado y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de conservación y preservación

por medio de la creación y el confinamiento de espacios forestales.

Silvicultura de preservación y conservación: La guerra contra la escasez y la desecación

La silvicultura de conservación en la India es fundamentalmente moderna [...] Como en el resto de la India, los funcionarios técnicos del Rajastán, organizados en jerarquías muy estrictas, difunden programas racionales de gestión forestal desde oficinas e instituciones centralizadas. Sin embargo, a diferencia de otras regiones de la India, donde la silvicultura se enfoca en gran parte en la agrosilvicultura de cultivos agroforestales en bosques comerciales, la silvicultura de Rajastán se ocupa tanto de contener la amenazante expansión del desierto mediante la *preservación*, mientras proporciona recursos para el riesgo potencial [...] del crecimiento demográfico por la *conservación*.

La silvicultura de preservación en la India se inició con el establecimiento de la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972. En Godwar, esto supuso la creación, en 1986, del Santuario de Kumbhalgarh, un área protegida para la vida salvaje en las colinas centrales de Aravalli [...]

El manejo de los bosques de laderas suele describirse como una técnica para la preservación de la vida salvaje, pero se justifica dada su relevancia para frenar la desertificación en regiones del este. A pesar de la evidencia en contra, entre muchos silvicultores y funcionarios prevalece la idea generalizada de que la cordillera de Aravalli "actúa como un gran freno para el avance de la arena hacia el centro de la India" (Bhalla, 1992b: 15) y que las dunas se extienden de forma alarmante hacia Delhi (Dhaberia, 1984; Sharma y Kundra, 1984) [...]

El objetivo principal de esta política de preservación es mantener espacios salvajes aislados de los humanos (Cronon, 1995). Para preservar y proteger los paisajes de la desertificación, se restringe la actividad humana en cinturones forestales protegidos. Kumbhalgarh se ha desarrollado como un "espacio natural" del que están excluidos todos los habitantes, con excepción de los grupos *adivasi* (tribales) [...] Mientras que la recolección

a pequeña escala en los bosques está permitida y también se plantan algunos árboles en el bosque [...] el estado silvestre del bosque se mantiene excluyendo a las personas.

Fuera del espacio de preservación del bosque, prevalece la silvicultura de conservación. Los técnicos forestales insisten en que "para alcanzar el objetivo establecido de 33.3% de la superficie del país cubierta con bosques, además de los bosques tradicionales, necesitamos plantar unos 35 millones de hectáreas y convertirlas en bosques" (Maithani, 1988, v). Las plantaciones suelen adoptar la forma de lotes de árboles en las tierras de las comunidades, para aliviar la crisis nacional de leña (Gobierno de la India, 1976; Malhotra y Sharma, 1988). En Godwar, estas plantaciones están bajo cuidado de la autoridad del Departamento Forestal de Rajastán y sus expertos, cuyos modelos de conservación provienen de estaciones experimentales lejanas en Jodhpur y Dehra Dun.

La silvicultura de conservación requiere la plantación de una pequeña gama de especies, entre ellas *Prosopis juriflora*, *Acacia nimbica* y *Avacia tortilis*. Estas especies son seleccionadas por su rápido crecimiento y su tasa de sobrevivencia en condiciones de escasez de lluvias. *P. juliflora* —juliflora o mezquite— es una especie apreciada en particular debido a su tenacidad y su escaso valor como especie forrajera. Poco afectadas por la fauna local, las plantaciones de juliflora sobreviven para reverdecer el paisaje, al tiempo que proporcionan una reserva de leña y protegen los empleos de los directivos de menor rango en la burocracia.

En resumen, la silvicultura en Rajastán consiste en acciones tanto para preservar la cobertura de árboles nativos como para fomentar la plantación de recursos comunitarios. Las plantaciones científicamente manejadas están diseñadas para proporcionar leña a una población en crecimiento, en tanto que los bosques de conservación detienen la expansión de un desierto ingobernable. Aunque distintas, ambas prácticas interpretan el paisaje tradicional como inconsistente, salvaje y propenso a la escasez. Se trata de una conceptualización fundamentalmente moderna, basada en las nociones maltusianas de la demografía y en las visiones neoclásicas de la oferta y la demanda (Xenos, 1989).

La precisión de esta descripción de Godwar es discutible. Los informes del siglo XIX representan a la región como productivamente estable (Tod, 1987 [1829]), pero nunca se ha reunido evidencia sólida (Roy y Pandy, 1971; Sharma y Kundra, 1984) [...] algunos funcionarios cuestionan la "crisis de la leña" argumentando que el ingenio humano y la generosidad de la naturaleza proporcionan combustibles de un tipo o de otro (Bachkheti, 1988: 149-150). Aun así, los funcionarios forestales insisten en que las prácticas locales en realidad incrementan la escasez y que "todas las tierras no aptas para la agricultura deberían incluirse en los programas de aforestación" (Muthana, 1988) [...].

Intensificación en Godwar: La búsqueda de la estabilidad

Los relatos coloniales sobre Godwar previos a la independencia describen una producción de maíz y algodón de riego que, por lo general, no se llevaba a cabo durante todo el año. Esto dependía en gran medida del ciclo de nutrientes de las especies herbáceas de las tierras en descanso (Rajputana- Gazetteers, 1908). En la última década, la intensificación de la agricultura demanda la extensión de la producción durante todo el año, el aprovechamiento de grandes extensiones de barbecho en la temporada seca y la disociación de la agricultura de la producción no agrícola de especies silvestres [...] las tierras con doble ciclo de cultivo aumentaron en la región en 17% entre 1984 y 1992, alcanzaron 28% del total en 1992 y disminuyeron en la misma proporción que los recursos herbáceos en la estación seca (Gobierno de la India, 1995a; 1995b).

En estos campos irrigados, de estación seca, los productos comerciales abarcan buena parte de la expansión del área de cultivo, como se muestra en el Cuadro 2. [...] Esta tendencia coincide *grosso modo* con el estancamiento de los precios del maíz y el trigo a escala mundial y con las oportunidades que ofrecen los mercados regionales. Por tanto, este proceso de intensificación se explica, en parte, por la expansión de los mercados de semillas oleaginosas y de algodón dentro y fuera de la región.

Sin embargo, de acuerdo con Akhil Gupta (1998), analizar los cambios en el paisaje indio tan solo en términos de expansión espacial del capitalismo es

subestimar el carácter moderno del problema. El cambio agrícola es producto de la intervención gubernamental deliberada en las prácticas locales; el aumento de los cultivos deriva de la inversión estatal masiva en la intensificación mediante el subsidio para la perforación de pozos, la construcción de presas y el suministro de energía eléctrica para el bombeo continuo. La superficie de riego del distrito pasó de 88.280 has en 1985 a 228.830 en 1995, y 76% de esa superficie se riega con pozos y pozos entubados subsidiados por el Gobierno (Gobierno de la India, 1995b). El capital para el desarrollo proveniente del Programa de Zonas Áridas y del Programa de Desarrollo del Desierto alcanzó un máximo de 2 134 429 de dólares a mediados de los ochenta, y los fondos destinados al desarrollo agrícola aumentaron de 28 a 51% de la inversión total a lo largo de la década (Verma, 1984). El resultado fue un aumento de cinco veces en la capacidad de almacenamiento de agua en los proyectos de riego gubernamentales entre 1960 y 1980, seguido más tarde por un aumento en la perforación privada (aunque subvencionada) de pozos entubados para aprovechar el suministro creciente de aguas subterráneas (Figura 5). En las regiones semiáridas de la India, como el sur de Palí, los esfuerzos de la revolución verde [agricultura industrializada con uso intensivo de capital] se han centrado en incrementar los cultivos de riego a lo largo del año.

Tabla 2. Cambio en la cobertura de cultivos, 1977–1997.

Cultivo	Cambio 1977–1997 (hectáreas)	Cambio desde 1977 (% de 1977)	Índice de precios 1997 (1952 = 100)
Mijo perla	-19,215	-15.97%	1162
Trigo	-28,421	-27.59%	1206
Maíz	5,885	26.14%	1206
Sésamo	-8,621	-8.15%	2372
Mostaza	100,980	465.93%	2507
Algodón	15,484	160.11%	1223

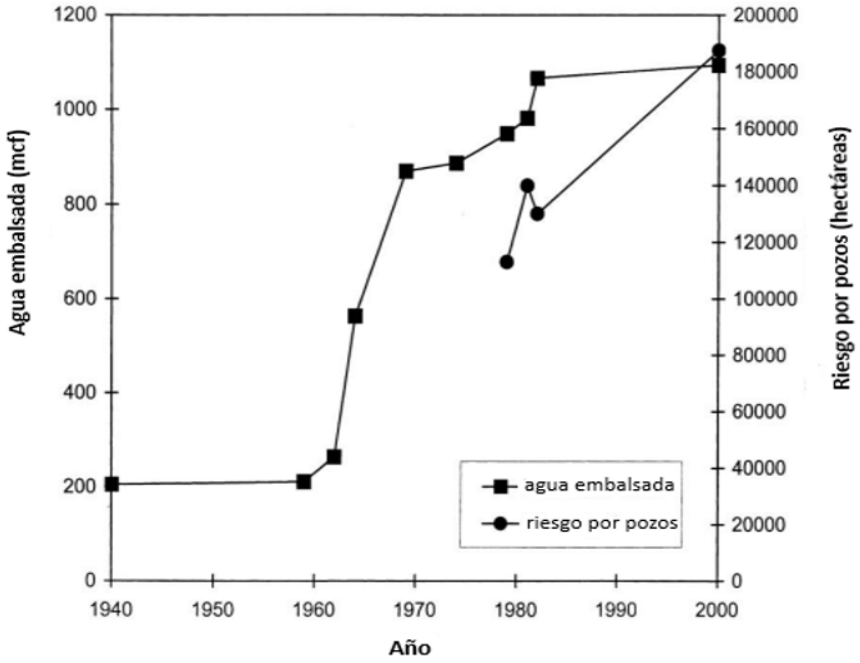
Fuente: Departamento de Economía y Estadística del Gobierno de la India (1979, 1998).

La inversión gubernamental en agricultura se plantea sistemáticamente en función del progreso y la estabilidad, enalteciendo los servicios de extensión del Estado moderno, y los funcionarios continúan insistiendo en una "revolución" de la agricultura de temporal hacia rendimientos previsibles y constantes.

Los técnicos y las instituciones actúan en "estrecha relación con el agricultor" para reeducar a los productores locales en las técnicas de plantación y la programación del riego (Shankarnarayan, 1987: 4). [...] Esto exige desmontar los regímenes tradicionales de gestión del barbecho. Requiere también pasar de los insumos que provienen del bosque a los fertilizantes industriales.

La intensificación de la producción pecuaria ha sido paralela a la del sector agrícola. [...] El hato ganadero total ha aumentado en la región a pesar de las graves sequías y de la pérdida de los rebaños durante las décadas de 1970 y 1980. En particular, ha aumentado el número de pequeños rumiantes (ovejas y cabras), en relación con el ganado mayor (vacas, búfalos y camellos). Las estimaciones oficiales —y, por tanto, extremadamente conservadoras— indican que cada año ingresan a las áreas de reserva forestal un total de 44 753 animales de gran tamaño y 124 955 animales pequeños, con una tasa elevada de incremento anual en este último número (Chief Wildlife Warden, 1996). Este aumento se debe a la cría para el sacrificio, como demuestra el drástico cambio en la proporción de sexos del hato regional: cada vez son más los machos que van al matadero antes de cumplir dos años (Figura 6).

Figura 5. Embalses y captaciones de agua en Godwar, 1940-2000.

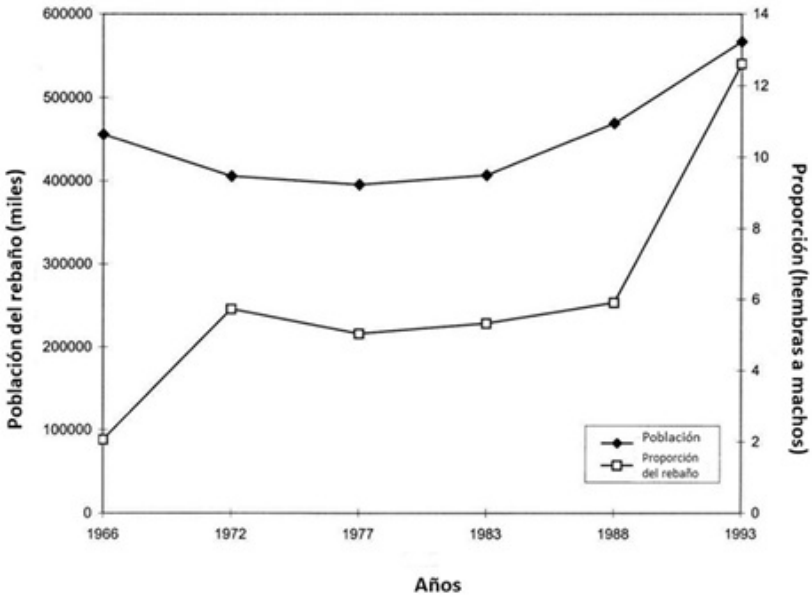


Una vez más, sin embargo, la política gubernamental de planeación para la intensificación parte de una noción que separa el espacio social y el natural. El pastoreo en la reserva está cada vez más restringido, y el apoyo veterinario del Gobierno está orientado consistentemente hacia la mejora de razas para la cría y la alimentación en establos (Köhler-Rollefson y Rathore, 1998). Al igual que el caso de la agricultura intensificada [agricultura con más insumos de mano de obra y materiales por unidad de tierra o de cultivos], la práctica social de la ganadería debe separarse de los espacios salvajes de las colinas boscosas.

Al igual que la silvicultura moderna, la iniciativa para intensificar la producción agrícola y pastoril parte de un sistema conceptual que pretende purificar las confusas combinaciones de uso y cobertura de suelo presentes en el manejo tradicional. Los gestores ambientales del Gobierno buscan tipos de cobertura de suelo consistentes y específicos: las tierras agrícolas deben ser cultivadas todo el año para satisfacer las necesidades sociales; las tierras forestales deben

ser espacios naturales. La intención de separar el espacio de producción humana del espacio de conservación ambiental, y la concepción del mundo que la sustenta, es fundamentalmente *moderna*.

Figura 6. Demografía ganadera, 1966-1993.



La gestión racional del medio ambiente como modernidad capitalista

Las múltiples y a menudo contradictorias definiciones de la modernidad van desde la estética (Bürger, 1984) hasta la sociología (Bernstein, 1985) y destacan también los cambios culturales (Bell, 1976) y económicos (Horkheimer y Adorno, 1972) de la vida social en los últimos siglos. No obstante, un conjunto de temas comunes se manifiesta en la comprensión de los fenómenos como categorías elementales discretas e inviolables (racionalización), de las creencias previas a la Ilustración como falsas confusiones y supersticiones (optimización), y de la vida humana como desvinculada del mundo natural, tanto administrativa como intelectualmente (división).

Esta definición se ajusta a las prácticas de cultivo que se han desarrollado recientemente en la región india de Godwar. No cabe duda que algunos de estos procesos de modernización tienen sus raíces en el capitalismo. No obstante, gran parte de la separación moderna entre naturaleza y sociedad solo está relacionada de forma tangencial con el capitalismo. La silvicultura de conservación y la protección de la vida salvaje estaban consagradas en la legislación india y eran impulsadas activamente antes de que predominaran el ecoturismo y la naturaleza mercantilizada [es decir, la naturaleza tratada como algo que puede venderse en el mercado].

La revolución verde en India, con sus subsidios gubernamentales para el riego y los insumos químicos, no ha sido esencialmente capitalista (Shiva, 1991: 210). La modernidad no excluye el capitalismo, pero abarca algo considerablemente mayor, incluye sobre todo a las prácticas científicas cargadas del poder de un Estado fuerte y el imaginario geográfico de una economía cultural poscolonial.

El cambio esperado del paisaje bajo modernización

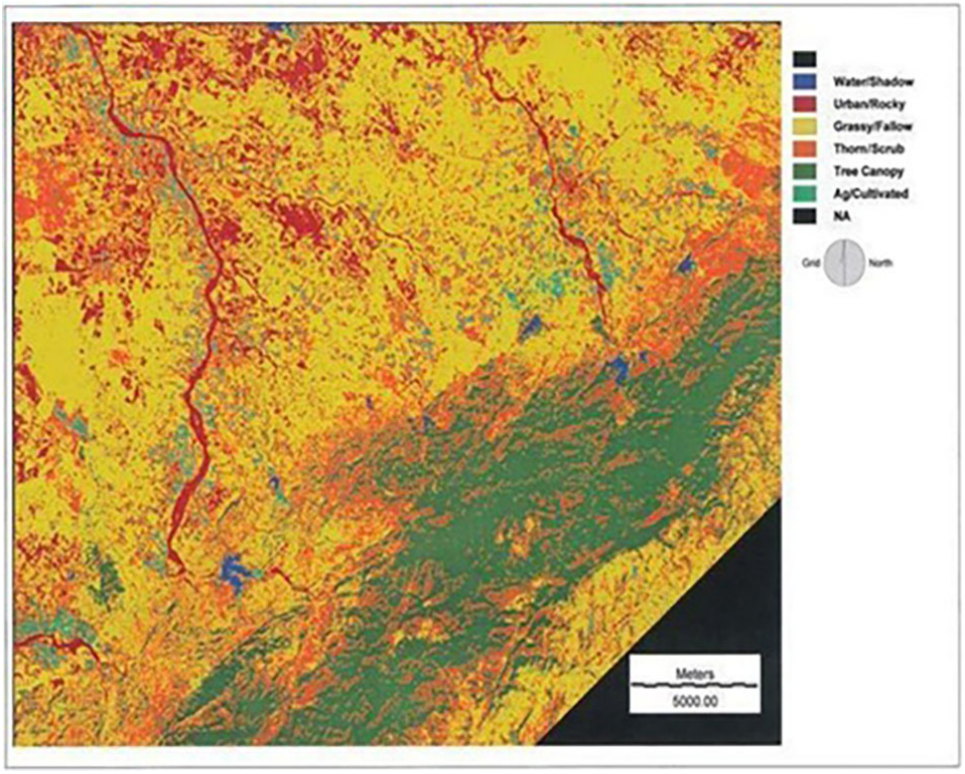
[…] Podríamos predecir que el análisis de la cobertura de suelo durante el periodo de 1986 a 1999 revelaría (1) un aumento de la intensificación de la agricultura, (2) una disminución en los pastizales y matorrales, (3) el mantenimiento de la cubierta forestal y (4) el aumento de la frontera espacial entre zonas agrícolas y forestales. La comparación mediante pares de imágenes satelitales de la zona durante los meses de invierno de 1986 y 1999 permite comprobar estas hipótesis.

Análisis del cambio de uso del suelo

Para evaluar los cambios en la ocupación del suelo, se clasificaron y compararon dos imágenes de satélite SPOT mediante tabulación cruzada categórica. Las imágenes de veintidós metros de resolución seleccionadas fueron de enero de 1986 y 1999, años de precipitación similar tanto para el año de la imagen como para el monzón anterior. Ambas imágenes se tomaron durante

la estación seca en invierno para resaltar las diferencias en la cubierta de vegetal durante el año y destacar los contrastes en la extensión de la agricultura de riego durante la estación seca, lo que refleja la intensificación productiva. Las imágenes se clasificaron mediante una técnica iterativa de agrupación de isodatos en imágenes de componentes principales producidas a partir de datos multiespectrales crudos. Los veintiocho grupos resultantes se agregaron a conjuntos de categorías comparables. Las imágenes (Figuras 7 y 8) se sometieron a un análisis de clasificación cruzada para evaluar los cambios en la cobertura general, así como los cambios en los tipos específicos de cobertura vegetal.

Figura 7. Cubierta terrestre de Sadri/Kumbhalgarh, 1986.



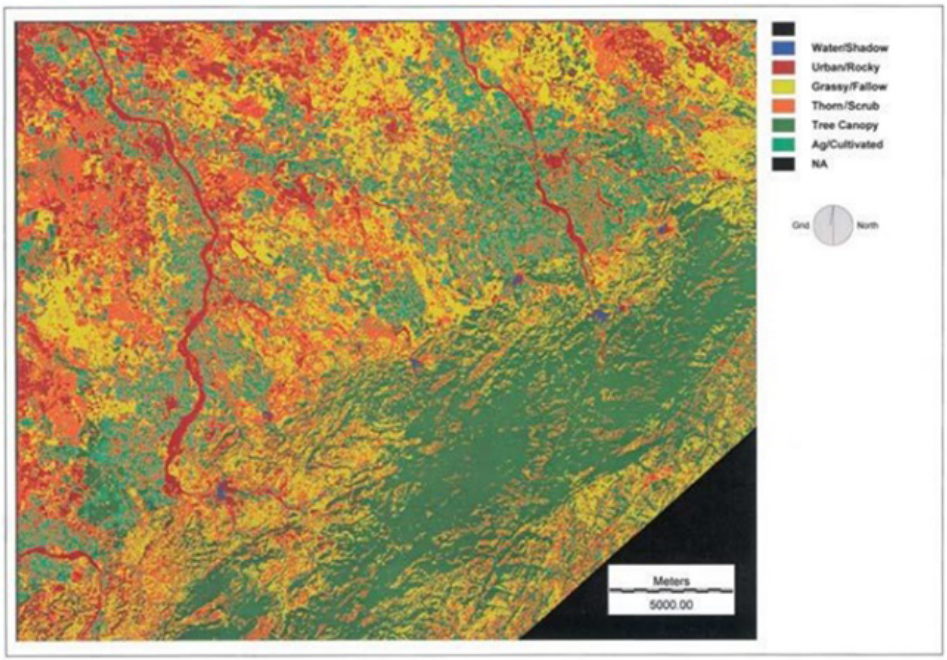
En cada una de las imágenes, se presentan seis clases generales de cobertura vegetal.[2] "Árboles de dosel" se refiere a los bosques cerrados, que incluyen varios conjuntos de especies, desde la cobertura de *Ziziphus* de las llanuras aluviales y las tierras bajas hasta los bosques de *Anogeissus* en las cumbres altas, así como la cobertura "agricultura/plantaciones". La categoría "hierba/barbecho" representa la cobertura herbácea de gramíneas y hierbas perennes, incluyendo las extensiones de *Cynodon dactylon* en los campos en barbecho y los tapetes de *Dactylon aegyptium* comunes en las tierras no cultivadas. El "espino/matorral" incluye la cobertura de sabana abierta con mezclas de árboles y hierba que no forman un dosel cerrado por completo. Las zonas descubiertas, rocosas y urbanas se mezclan en las imágenes, pues la técnica de construcción de la región, con piedra autóctona, dificulta la distinción. Basándose en una muestra espacialmente estratificada de 143 puntos, la imagen de 1999 tuvo un error de precisión de 0,18 +/- 0,06 con un intervalo de confianza de 95%.[3]

Los errores sistemáticos en la clasificación derivan de la sobreestimación de la cobertura de hierba/barbecho (error de comisión) y de la subestimación de árboles de dosel (error de omisión) en la imagen de 1999.

2 Para la imagen contemporánea (1999), es posible realizar una clasificación más precisa. Sin embargo, la imposibilidad de verificar la imagen de 1986 obligó a utilizar categorías agregadas.

3 No se pudo evaluar estadísticamente la precisión de la imagen de 1986, pero se revisó basándose en el conocimiento histórico de la cobertura del suelo en la zona.

Figura 8. Cubierta terrestre de Sadri/Kumbhalgarh, 1999.



Trayectorias de la cubierta terrestre

Los cambios netos en la cobertura vegetal entre ambas imágenes apoyan la hipótesis de que la intensificación y la conservación se ha producido de manera simultánea en la zona con grandes efectos sobre el paisaje (Tabla 3). La cobertura agua/sombra cambia poco a lo largo del periodo. Las zonas urbanas/rocosas duplican su cobertura a lo largo del periodo. Este cambio refleja en buena parte el incremento cercano al doble de la población urbana y el correspondiente aumento en la construcción de viviendas y carreteras. Los cambios más significativos incluyen la expansión de las tierras cultivadas y de la cubierta forestal. La cubierta forestal creció 40%, mientras que la agrícola se incrementó más de tres veces. La cobertura

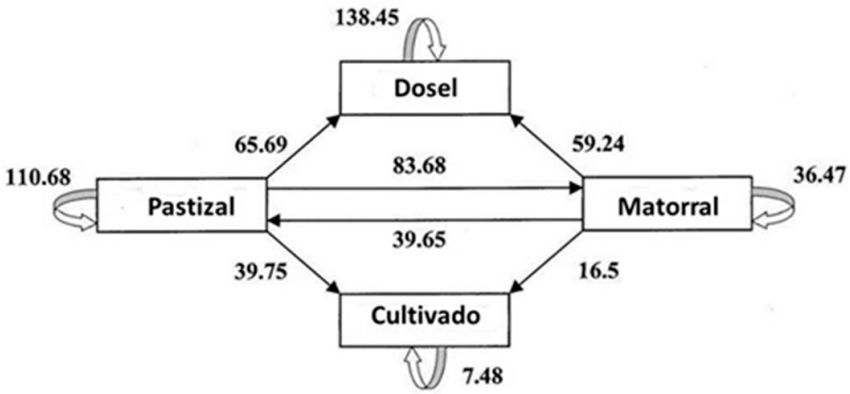
de pastizales y barbecho se redujo 45%. Es posible que el decremento de pastizales y el aumento de los bosques se hayan *subestimado*, y que estas cifras sean aproximaciones conservadoras del cambio. La interrelación de estas transformaciones se muestra en la Figura 9, donde se observan los cambios de cobertura superiores a 10 km^2 en todas las categorías. Como era de esperarse, el incremento de la cobertura agricultura/plantaciones en 1999 es producto principal del uso de pastizales en barbecho y "terrenos baldíos" con matorrales espinosos. Las inversiones en riego, pozos y el desarrollo agrícola producen la ampliación de los cultivos durante la temporada de secas, mientras que las rotaciones más rápidas en tierras de riego sustituyen la cobertura mixta de pastos y arbustos espinosos por el monocultivo a lo largo de todo el año.

Tabla 3. Cambio Neto en la Cobertura del Suelo en la Región de Sadri/Kumbhalgarh, 1986–1999 (km^2)

Cobertura	1986	1999	Cambio	% respecto a 1986
Agua/sombra	3.85	0.57	–3.27	–85.11%
Suelo desnudo/urbano/rocoso	74.48	81.8	7.32	9.83%
Pasto/barbecho	336.5	185.29	–151.21	–44.94%
Espinoso/matorral	161.69	161.2	–0.49	–0.31%
Dosel arbóreo	183.82	274.47	90.65	49.31%
Agrícola/cultivado	18.12	75.39	57.27	315.95%

Cabe destacar que la expansión de la agricultura no se produce a expensas de la cobertura de árboles de dosel, y que las zonas con cubierta forestal en 1986 tan sólo representaban 8.4% de la cubierta agricultura/plantaciones en 1999. Esto sugiere que la nueva agricultura no es resultado de la invasión de tierras forestales en áreas de reserva, como suele ocurrir en toda la India y en el resto del mundo (Williams, 1994). La agricultura en Godwar, como en muchas regiones semiáridas, depende de la tala de bosques, y el límite impuesto entre las tierras forestales y el espacio agrícola sigue siendo bastante estable.

Figura 9. Transformaciones de la ocupación del suelo, 1986- 99 (en km^2).



Aunque la cubierta neta de matorral se ha mantenido relativamente estable, la cobertura específica de este tipo de vegetación y su sucesión ecológica ha cambiado mucho a lo largo del periodo. Gran parte de las tierras cubiertas por matorral en 1986 se convirtieron en tierras cubiertas por árboles de dosel en 1999, y la mitad de las tierras cubiertas por matorral en 1999 procedían de tierras cubiertas de hierba y barbecho en 1986. La sucesión localizada y la dinámica de las perturbaciones explican gran parte de estos cambios contradictorios. El bosque de matorral, en particular en zonas al norte y al oeste de la reserva forestal, está cada vez más dominado por la agresiva juliflora, un árbol que puede crecer desde su etapa juvenil hasta alcanzar una copa extensa en un periodo de ocho a diez años. Al mismo tiempo, el área de matorral en la parte sur y este de la zona de estudio, especialmente en las zonas montañosas adyacentes a la reserva, ha sufrido fuertes talas. Las especies de esta zona, incluyendo árboles de crecimiento más lento como *Péndula* y *Acacia catechu*, no han crecido de nuevo, y han dejado desnudas las tierras semiarboladas, salvo por las hierbas perennes y las plantas herbáceas anuales. Esta rápida disminución de la cubierta de matorral a lo largo del "faldón" del costado norte del bosque se confirma en la verificación en terreno. A lo largo de esta frontera, hasta los límites de la zona de reserva forestal, el intenso ramoneo del creciente hato de ganado menor, la tala para

forraje y para leña han dejado laderas y llanuras de tocones. Esta reducción explica por qué 20% de la cobertura de matorral espinoso se ha degradado a una cobertura abierta y de pastos en la imagen de 1999.

Sin embargo, a pesar de la intensa tala, 75% de la superficie cubierta de bosque en 1986 continúa presente en 1999. En particular, la cubierta forestal dentro de los límites de la reserva ha resistido los fuertes niveles de tala a lo largo de la franja forestal, como ya se ha descrito. La relativa persistencia de la cobertura de árboles de dosel refleja los esfuerzos de conservación y plantación en Kumbhalgarh, y el marcado contraste de la cobertura dentro y fuera de los límites de la reserva muestran los resultados de la exclusión del área (Figura 10). Esto sustenta, de manera general, las afirmaciones del Departamento forestal acerca de que los esfuerzos de exclusión han mejorado la conservación desde que la reserva forestal obtuvo la categoría de santuario en 1985.

Figura 10. Límite amurallado del recinto de Kumbhalgarh. La tala y la poda intensivas en el límite de la reserva forestal explican el descenso vertiginoso de la cubierta de matorral —en este caso comunidades de *Acacia senegal* y *Ziziphus* nummularia— en los márgenes del recinto.



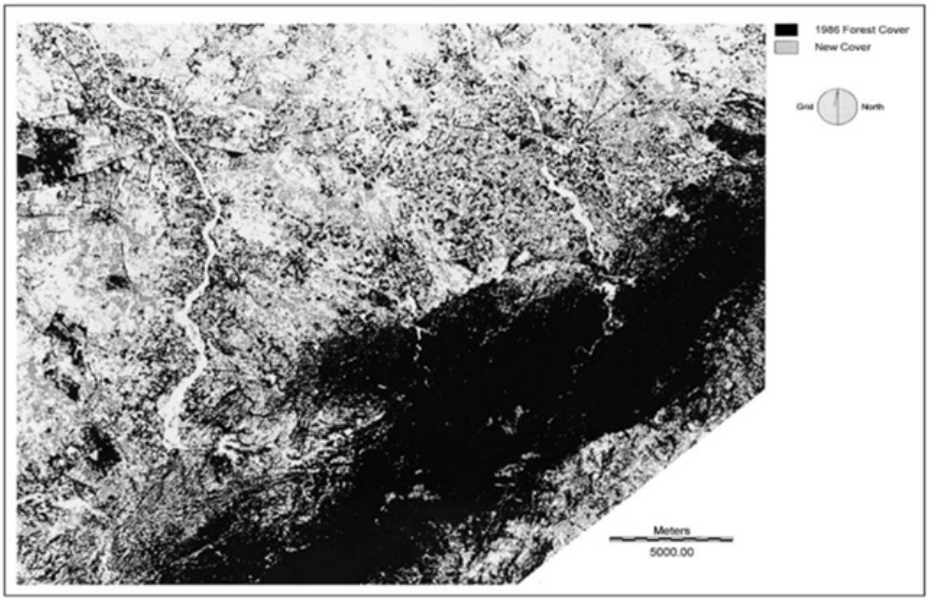
El cambio más drástico se produce en la disminución de la cobertura de pastos y barbecho, característica de la producción tradicional de las unidades familiares. En 1986, esta cobertura comprendía un tercio de la cobertura de suelo de la zona; ahora tan solo constituye una quinta parte. De esta cobertura, 12% se ha transformado en cultivos, siguiendo la tendencia mundial hacia la disminución de la cobertura de pastizales, dada la intensificación de la agricultura y el pastoreo (Graetz, 1994), no obstante, casi la mitad del área ha desarrollado una cobertura más densa de matorrales y árboles de dosel. Sin embargo, esta transformación, como ya se ha explicado, es espacialmente específica, por lo que puede observarse a lo largo del flanco del bosque, un aumento de la cobertura de pastizales en zonas de tala y ramoneo intensivos donde ha disminuido el matorral. Estas trayectorias contradictorias en la cobertura de pastos implican dos procesos diferentes. El aumento de la cobertura de pastos ocurre donde la cubierta de matorral ha sido talada y ramoneada de forma intensa. La disminución de la cobertura de pastos refleja tanto la extensión de la agricultura en la estación seca a las tierras en barbecho (en unas 4 000 hectáreas de la región estudiada) como la expansión de la cobertura de matorral y de árboles de dosel hacia tierras de pastoreo situadas *fuera de* los límites de la reserva forestal, fenómeno que se analiza con más detalle a continuación.

En conjunto, los cambios en la cobertura de suelo de la región reflejan las acciones del manejo moderno del paisaje; la cobertura forestal "natural" y los espacios agrícolas "sociales" han sido separados y ampliados. En este proceso, las zonas que históricamente integran los usos sociales y naturales del suelo, en especial los pastos y las tierras de barbecho, parecen haber disminuido. Sin embargo, un análisis espacial del cambio del paisaje plantea interrogantes sobre la naturaleza y la dirección de estas tendencias. Una cobertura inesperada apunta a contradicciones sorprendentes del paisaje moderno; más en concreto, la expansión de la cobertura de árboles de dosel en un nuevo tipo de bosque se abre paso en el paisaje claramente segmentado de la intensificación moderna.

Espacialidad del cambio forestal: La expansión de una cubierta terrestre inesperada

En la Figura 11 se muestra la localización de los nuevos espacios cubiertos por árboles de dosel y por matorrales. La cubierta original de bosque y matorral en el invierno de 1986 se marca en negro. Los nuevos manchones de árboles y matorral se señalan en gris. Lo que destaca es que el aumento de la cubierta de árboles de dosel no está espacialmente limitado a la esquina sureste de la zona de estudio, donde se aplica la silvicultura de conservación. Más bien, el mayor incremento de la cobertura arbórea se produjo fuera y a cierta distancia de la reserva forestal. Transgrediendo la clara distinción entre conservación y cultivo, el dosel se ha expandido hacia la zona agrícola de las llanuras, y casi 37% de los matorrales espinosos y 25% de los pastizales que existían en 1986 desarrollaron una cobertura de dosel durante el periodo analizado, dentro y alrededor de las tierras de las comunidades. Esta cobertura tampoco se ha expandido de forma exclusiva en las pequeñas zonas de silvicultura de conservación ni en las plantaciones de leña establecidas por los silvicultores. Al contrario, está invadiendo los pastizales de las aldeas, los extensos campos de barbecho y *los orans*, las tierras comunes sagradas de la región. Esta nueva cobertura forestal también ha comenzado a expandirse hacia los límites de la propia Reserva de Kumbhalgarh, donde la tala y el pastoreo han abierto nuevas zonas para la sucesión.

Figura 11. Distribución de la cubierta forestal emergente. Los grupos de cuasi bosques proliferan en el interior agrícola de las llanuras bajas.



Un examen más detallado de las características ecológicas del inesperado aumento del dosel revela que este nuevo bosque es distinto en forma y tipo a la cobertura original en la franja del bosque de colina. Estos bosques, que aparecen en grupos dispersos, se expanden rápido en intrusiones aisladas pero extendidas en toda el área (Figura 12). La especie dominante de este "bosque", juliflora, es un árbol exótico cada vez más importante en la región. En asociación con juliflora, estas nuevas extensiones de matorral y dosel también incluyen especies arbustivas autóctonas, como *Capparis seplaria*, *Grewia flavescens* y, algunas veces, *Lantena camera*, en combinación con gramíneas anuales nativas, especialmente *Aristida spp.*, y otras especies herbáceas locales, como *Heliotropium spp.* Esta nueva cobertura tiene poca semejanza con las comunidades forestales tradicionales de la región descritas antes, y constituye un tipo de paisaje

que puede ser mejor descrito como casi bosque. Estos bosques *invasores* son producto de elementos y presiones tanto sociales como naturales, y los principales responsables del rápido aumento de casi 50% de la cobertura forestal durante el breve periodo de estudio de trece años; pobladores y silvicultores insisten en que estos bosques de juliflora no existían hace veinte años.

Figura 12. Comunidad de *Prosopis juliflora* o cuasi bosque. Estos árboles, desconocidos en la región incluso hace veinte años, crecen ahora en rodales espesos e ininterrumpidos de hasta diez y quince kilómetros cuadrados.



Los cuasi-bosques son naturales: la ecología de comunidades de Prosopis

Las especies de este tipo de cobertura comparten características importantes, como la tolerancia a la sequía y ser poco adecuadas para el pastoreo o ramoneo de la mayoría de los animales. Forman masas densas o setos espinosos en los bordes de los campos, en baldíos y alrededor de los asentamientos (Figura 12). La comunidad depende principalmente del establecimiento y la propagación de la especie dominante, el árbol juliflora, conocido localmente como *angrezi* (inglés) *babul*, *vilyati* (extranjero) *babul* o *sarkari* (gubernamental) *babul*. Esta especie logra imponerse debido a atributos naturales, como su elevada tasa

de crecimiento, su capacidad de fijación de nitrógeno y su hojarasca fitotóxica. Estas características explican, en parte, el éxito de la comunidad.

En primer lugar, la juliflora crece rápido. Al ser una planta xerófita que regula las pérdidas por transpiración y la escasez de agua a través de la pérdida de hojas, la juliflora es extremadamente eficiente y mantiene su crecimiento en condiciones de sequía cuando otras especies no pueden hacerlo (Bogusch, 1951). En cuanto a la producción de madera, este árbol produce en plantación entre cinco y quince toneladas por hectárea al año, creciendo mucho más rápido que *Prosopis* (*cineraria)* y otros árboles nativos (Mann y Saxena, 1980; Saxena, 1993). Sus hojas no son ramoneadas, y la especie extiende su dosel con un crecimiento bajo y hacia los lados, de modo que en pocos años crea un obstáculo denso a la altura de la cabeza (Abebe, 1994; Lee *et al*., 1992). El extenso crecimiento lateral de sus raíces le permite competir con otras especies por la humedad del suelo y le otorga capacidad para una rápida propagación e invasión (Hocking, 1993).

En segundo lugar, la especie juliflora es conocida por su capacidad para fijar nitrógeno. El rápido crecimiento lateral de las raíces contribuye a mejorar las condiciones del suelo que se extiende desde su base y proporciona un entorno productivo tanto para el propio árbol, como para las demás especies que crecen al mismo tiempo en la comunidad de juliflora (Hocking, 1993).

Por último, las investigaciones recientes sobre la juliflora revelan que las hojas de este árbol contienen sustancias químicas alelopáticas solubles en agua. Los trabajos experimentales sugieren que estos inhibidores actúan deteniendo la germinación de especies herbáceas bajo la copa del árbol (Noor *et al*., 1995; Warrag, 1994). Sin embargo, estos efectos no son universales y algunas especies son más vulnerables a estos productos químicos que otras. En particular, se ha demostrado que estas sustancias químicas retrasan el crecimiento del *Cynodon dactylon*, una hierba forrajera crucial en Godwar (Al-Humaid y Warrag, 1998). Así pues, la alfombra de hojarasca formada durante todo el año por el árbol invasor babul impide el crecimiento competitivo de algunas gramíneas

locales, abriendo paso a las especies herbáceas de este conjunto resistente de especies invasoras.[4]

Los productores locales y los profesionales forestales coinciden en que el crecimiento de la comunidad de juliflora, una vez establecida, es extremadamente difícil de controlar. La especie tiene raíces profundas y vuelve a crecer después de ser cortada, incluso a nivel del tocón. En esta asociación, las demás especies del sotobosque de la comunidad, poco apetecibles, se benefician de la fijación de nitrógeno de juliflora y de la agresiva aglomeración de otras gramíneas y arbustos. Estas especies conforman un conjunto agresivo y de rápido crecimiento que puede aparecer de un día para otro y formar en tan solo cinco años una densa cubierta vegetal.

Los cuasi-bosques son sociales: las redes globales y locales de Prosopis juliflora

Estas comunidades también se benefician tanto de redes sociales que defienden el árbol juliflora como de ambientes perturbados de origen totalmente social, que surgen de la distinción moderna del paisaje. En el primer caso, el árbol juliflora es una especie exótica, introducida de forma intencional en Rajastán con fines estéticos y sociales específicos. Originario de América, el árbol apareció por primera vez en el subcontinente, en la provincia pakistaní de Sindh, en 1878. El maharajá de Jodhpur llevó el árbol al Rajastán occidental en 1912 (Hocking, 1993).[5] La intención en aquella época era el "reverdecimiento" general del paisaje, una meta estética necesaria para crear un reino que, de cierta manera, se pareciera a la tierra "verde y agradable" de los colonizadores británicos.

Desde entonces, la popularidad de la planta ha sido reforzada por la atención internacional y el entusiasmo de expertos, como demuestran organizaciones de técnicos como Amigos del Prosopis y las frecuentes conferencias

4 Este fenómeno se ha observado anteriormente en la región cercana de Kuch, en Gujarat, donde la teledetección revela una disminución de los pastizales a raíz del crecimiento de la juliflora (Jadhav *et al*., 1993).

5 Bhandari (1990) fecha la plantación de juliflora por parte del maharajá en un poco más tarde, en 1914. La historia local sostiene que las semillas fueron esparcidas desde uno de los primeros aviones que se vieron en la región.

como la reunión llamada "La promesa del Prosopis", patrocinada tanto por el Fondo de Defensa del Medio Ambiente como por el Banco Mundial. La especie se vincula bien con esas organizaciones internacionales, en parte debido a sus cualidades naturales, pero también por sus características sociales. Al ser un árbol con escaso valor para la agricultura tradicional o la producción pastoril, es estrictamente valorado como madera para combustible. Esto se ajusta al modelo ambiental malthusiano adoptado por las organizaciones ambientalistas internacionales, que interpretan la degradación del suelo como producto de la "crisis de la leña" entre los pobres. De esta forma, el árbol se ha convertido en una figura prominente en los círculos internacionales de desarrollo y es favorecido en los planes quinquenales de la India. Está "bien conectado", con aliados en asociaciones para el desarrollo y en asociaciones científicas, está bien situado en grupos internacionales, burocracias nacionales y en sistemas de expertos locales. Es una especie de árbol cercana a científicos, ministros y reyes, por lo que ha contado con enorme ayuda en su diáspora internacional.

El árbol también es popular entre los silvicultores locales, que lo defienden a pesar de sus reconocidos efectos perjudiciales para la biodiversidad local. El incremento de cualquier tipo de cobertura arbórea mejora las estadísticas forestales que sostienen a una burocracia ineficaz y a veces corrupta (Kummer, 1995). Así, el crecimiento de juliflora respalda la "retórica" habitual de la silvicultura en el sur y el sudeste asiáticos (Bryant, 1996). El éxito de este árbol desde la perspectiva de los silvicultores se debe a motivos algo menos instrumentales como la cultura tecnológica emergente en la gestión forestal moderna. El árbol produce una amplia copa que puede observarse fácilmente desde plataformas de teledetección en el aire o en el espacio. Así, cuando un silvicultor insiste en que la juliflora permite "mirar un bosque desde el aire" y "ver el treinta por ciento de la tierra con bosque", reconoce un objetivo subyacente de la silvicultura moderna: producir un paisaje que luzca verde desde el espacio. La amplia copa del árbol lo alía con los silvicultores y expertos en desarrollo internacional, cuyas estimaciones sobre la cobertura de suelo determinan las especies que deberían dominar el paisaje (Robbins, 2001). Nunca se pretendió que esta especie se extendiera por las tierras agrícolas y los pastizales de las comunidades, y tampoco que se alejara de los linderos de

las plantaciones, como ha sucedido, sino que fue introducido agresivamente en el paisaje a fin de cumplir con los parámetros de un Estado moderno. Los cuasi-bosques son claramente construcciones sociales, forjadas en el desierto verde como paisaje anhelado y establecidas como baluarte del control ambiental como objetivo de la modernidad.

Además, estas comunidades invasoras surgen con mayor frecuencia en espacios sociales que han sido sometidos a un tiempo a la presión demográfica y a un estrés institucional creciente dada la imposición del manejo moderno. En concreto, los pastizales y bosques tradicionales de las aldeas, que en conjunto abarcan una gran proporción de las tierras forestales y de barbecho descritas antes, han sido los sitios invadidos por las comunidades de cuasi-bosques. Existen tres razones para explicarlo. En primer lugar, a través de su mandato de *preservación*, el Departamento Forestal ha implantado en el bosque de Kumbhalgarh cada vez más normas que restringen el pastoreo, el ramoneo y la procuración de forraje, y ha eliminado de esta forma un subsidio importante para la producción agropastoril. En segundo lugar, la *intensificación* del paisaje agrícola financiada por el Gobierno destina grandes extensiones de pastos y tierras en barbecho al trabajo agrícola. A medida que el ganado desplazado de la región se ve forzado a ocupar tierras comunales tradicionales, aumenta la presión del pastoreo, el ramoneo y del forraje. En tercer lugar, bajo las iniciativas modernas para la *conservación* del suelo, la gestión de la burocracia ha recategorizado los recursos tradicionales al colocarlos bajo la autoridad de una nueva institución. Definidas como tierras "baldías" que necesitan ser urbanizadas, la mayoría de las tierras comunitarias de las aldeas son ahora controladas por una autoridad local del gobierno muy cuestionada. En este proceso, los mecanismos de gestión se colapsan, pues el poder local sobre la tierra es eliminado sin ser sustituido por una autoridad legítima (Robbins, 1998a).

El aumento de la tala, el pastoreo y el ramoneo —en condiciones, donde los recursos comunitarios disminuyen y la gestión es inestable— provocan la merma de la cubierta herbácea y arbórea. Tanto los funcionarios locales como los productores informan que la biodiversidad y la riqueza de la cobertura en la mayor parte de las tierras comunitarias han disminuido rápido en los últimos quince años y señalan la exclusión de tierras y las disputas políticas en

la gestión como factores causales importantes. De este modo, los problemas institucionales han provocado problemas ecológicos.

Estos espacios deteriorados constituyen excelentes ámbitos para la colonización de comunidades de juliflora, que se adentran en zonas abiertas, carentes de árboles de sombra u otras especies que puedan competir por la escasa humedad del suelo. De esta forma, las especies invasoras suelen trasladarse, en conjunto, a tierras comunes y arruinadas de las aldeas, y convierten procesos de perturbación y degradación temporales en cambios ambientales de largo plazo.

¿Son los cuasi-bosques bosques malos?

A pesar de sus efectos considerados en general como perjudiciales, las comunidades de juliflora son percibidas de forma diversa. Los ganaderos se oponen a la propagación de este tipo de cobertura, ya que tiene poca utilidad como forraje y algunas de las especies que la componen (por ejemplo, *Lantena camera*) pueden incluso ser mortales para los rumiantes. Además, la pérdida permanente de recursos útiles para el pastoreo en pro de las comunidades invasoras indigna a los ganaderos, que exigen de forma reiterada su erradicación. Algunos productores pobres y marginados ven con buenos ojos la propagación de la juliflora y utilizan esta especie de rápido crecimiento para obtener leña o producir carbón vegetal. De los hogares de la zona, 60% declaran utilizar juliflora de algún modo (Tabla 1). Aun así, la mayor parte de las personas consideran la invasión como la pérdida de un paisaje valioso para la aldea; algunos grupos de productores se han organizado localmente para intentar eliminar la juliflora de las tierras comunitarias.

Los silvicultores, que consideran beneficioso el incremento de la cobertura vegetal, observan a las comunidades invasoras como una bendición. Sin embargo, les preocupa la expansión descontrolada de estos paisajes y admiten abiertamente que fue algo imprevisto en su totalidad. Estas comunidades invasoras también están aumentando dentro de la propia reserva natural, y los funcionarios forestales están muy preocupados por la "contaminación" de la reserva y la amenaza que la juliflora y sus aliados suponen para la conservación

de los paisajes "naturales". Tras suspender la plantación de esta especie, el Departamento Forestal lucha en la actualidad para encontrar una forma de frenar su expansión. Sin embargo, los intentos recientes de subcontratar la tala de estos árboles en zonas de conservación para la obtención de leña han sido un fracaso generalizado. Los taladores solo cortan árboles maduros, mientras que los árboles jóvenes pueden alcanzar su plena altura en pocos años.

Los cuasi-bosques no son de ninguna manera claramente "mejores" o "peores" que las comunidades de especies nativas, ni más "naturales" que los sistemas mixtos mantenidos con cuidado en épocas pasadas. Sin embargo, su rápida propagación cuestiona la estricta distinción entre los paisajes sociales y naturales. Estas comunidades ecológicas tienen un origen y un carácter comprendido por lo regular como "social"; están dominadas por una especie de maleza introducida y prosperan en condiciones de perturbación producto de la intensificación moderna de la producción agrícola y pastoril. Del mismo modo, tienen características típicamente interpretadas como "naturales", que operan en su totalidad fuera del control de las autoridades a cargo de la planeación y se extienden mediante un proceso natural de invasión según reglas predecibles de sucesión. Estos nuevos bosques se componen tanto de especies locales "naturales" como de especies exógenas introducidas "socialmente". Son un híbrido social/natural y, por tanto, muchos los consideran como una anomalía y una amenaza (Figura 13).

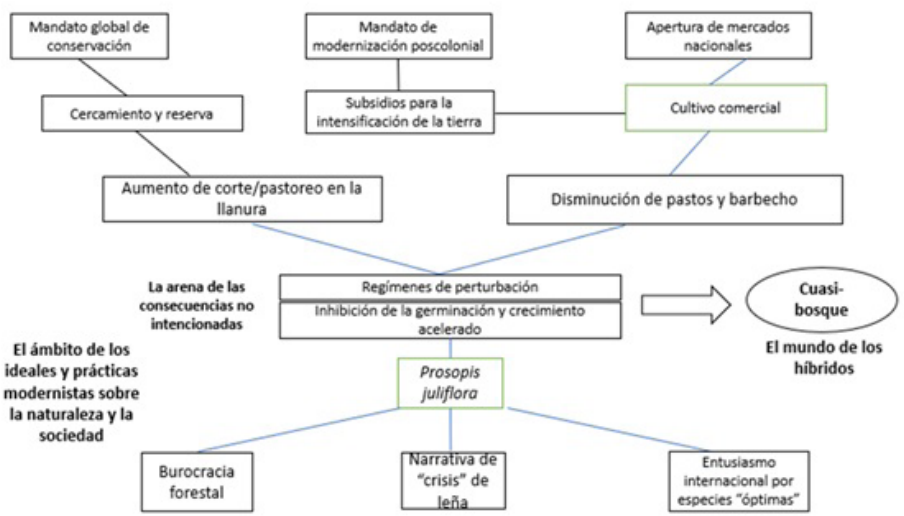
Explicar el fracaso de la distinción naturaleza/sociedad

¿Cómo explicar la ocurrencia de un cambio tan amplio de la cobertura de suelo, de forma involuntaria y sin la planificación humana directa, a lo largo de un periodo de control férreo del paisaje rigurosamente planificado y aplicado? ¿Cómo proliferó un tapiz tan vasto de ecologías híbridas justo en un momento donde estas eran erradicadas? Varias teorías sugieren respuestas a esta interrogante.

Ecología del desequilibrio: dividimos la naturaleza de forma equivocada

La primera respuesta surge de la creciente preocupación de ecólogos, biólogos, silvicultores, especialistas en praderas y geógrafos por los procesos de perturbación ecológica (Botkin, 1990; 1995; Behnke y Scoones, 1993; Kepe y Scoones, 1999; Zimmerer, 1994). Desde esta perspectiva, los efectos involuntarios y en cierto modo indeseables de la proliferación de juliflora provienen de la incomprensión de los gestores ambientales sobre la estabilidad ecológica de los monocultivos y las reservas forestales. La simple exclusión de tierras forestales con la intención de mantener la extensión natural y las formas de cobertura es claramente inadecuada para contrarrestar los cambios dinámicos que se producen en el paisaje. El problema fundamental es, por tanto, observar a la naturaleza de forma incorrecta, imaginándola inmutable e intentando imponerle un estado permanente mediante la exclusión. Esta concepción irreal e incorrecta de la naturaleza impulsa los cambios no deseados. Para Botkin y otros "nuevos" ecólogos, la clave consiste en separar el cambio que es *natural* de aquel que es *social* —aprender a vivir con el primero y ajustar el segundo—.

Figura 13. Los orígenes sociales y naturales de los cuasi forestales.



Este enfoque permite comprender mejor el carácter dinámico de los procesos de sucesión en Godwar. La sucesión natural claramente amenaza la estabilidad de los sistemas sociales donde se han eliminado el barbecho y los bosques de colina. Este enfoque también subraya la importancia de las personas *dentro de* los sistemas ambientales, como lo demuestran las prácticas tradicionales de uso de suelo en la región que, aunque no eran "prístinas", eran sostenibles y productivas. La ecología del desequilibrio, por tanto, ofrece una mirada para comprender las sorpresas que encuentran los silvicultores y la población local.

No obstante, esta perspectiva arroja poca luz sobre la relación entre la terminología moderna social/natural y los entornos concretos producto del manejo. De hecho, al aferrarse a la distinción entre lo social y lo natural propias del manejo moderno, la nueva ecología insiste en que, si bien las metáforas anteriores sobre la naturaleza son incorrectas, pues se basan en analogías mecánicas para explicar el cambio natural, lo "natural" y lo "social" aún pueden distinguirse por medio de la ciencia moderna.

La producción de la naturaleza: el capitalismo dividió incorrectamente la naturaleza

Por otro lado, los estudios críticos sobre el ambiente ofrecen un análisis más exhaustivo que sugiere una causa específica para las decisiones inadecuadas tomadas durante la gestión en Godwar. Siguiendo a Smith (1996) y Soper (1995), la naturaleza se produce socialmente, y comprensiones recientes, entre las que destacan imágenes contrapuestas de la naturaleza "salvaje" y "doméstica", reflejan "la naturaleza contradictoria de la modernidad burguesa" (Smith, 1996: 42). Además, estas ideologías ocultan prácticas sociales reales que actúan en el paisaje y se centran en la apropiación de los excedentes naturales para la acumulación de capital, lo que de forma inevitable conduce a la "revuelta" de la naturaleza (J. O'Connor, 1994; M. O'Connor, 1996).

Con respecto a la situación de Godwar, esta perspectiva aporta algunos elementos para explicar lo que sucede. Al igual que iniciativas similares en todo el

mundo, la exclusión del bosque y el arado del barbecho pueden considerarse actos de apropiación o extracción de capital comunitario (Muldavin, 1996). Muchos productores que por tradición utilizaban estas tierras han sido despojados de sus recursos, incluso aunque hayan aumentado los excedentes de producción (Goldman, 1991). Todo el proceso, podría teorizarse más adelante, se encubre bajo el velo ideológico ecoamigable de la conservación de la vida salvaje, un imaginario ecológico del desarrollo capitalista (Peet y Watts, 1996).

Al mismo tiempo, sin embargo, no es claro que el manejo gubernamental moderno proporcione excedentes a una elite económica y política. La división y redistribución socializada de la tierra es intrínseca a las iniciativas de desarrollo regional, y el distrito meridional de Pali aún es comparativamente más equitativo en la distribución de la propiedad de la tierra que otros distritos de Rajastán (Gobierno de la India, 1995b). Del mismo modo, no se sabe si la reserva forestal aumenta de algún modo la apropiación del capital natural en la región. La reserva de Kumbhalgarh, de hecho, se inició como un esfuerzo para *disminuir* la extracción a gran escala de madera del bosque por parte de las elites. La propagación de juliflora también ha proporcionado nuevos recursos a los hogares más pobres a partir de la venta de carbón vegetal. Tampoco está claro si la propagación de cuasi-bosques representa solo una "revuelta de la naturaleza". En realidad, tal comprensión de la naturaleza se basa en un modelo de equilibrio de la dinámica ambiental que ha sido cada vez más cuestionado por casos como el de Kumbhalgarh, que desafían las visiones unilineales de cambio, como lo sugiere la "nueva" ecología (Botkin, 1990; Demeritt, 1994; Fairhead y Leach, 1994).

Ecología construida: dividimos una naturaleza imaginaria

También podría argumentarse que la categoría conceptual de "naturaleza", que tanto los nuevos ecólogos como los teóricos ambientales críticos intentan preservar, impulsa en sí misma el proceso de cambio en la región. En este sentido, la idea de naturaleza salvaje o de un mundo natural inalterado que puede "rebelarse" ha sido objeto de un creciente escrutinio en la teoría social contemporánea, que destaca el carácter discursivo de la "naturaleza". Estas ideas son más que ideologías que encubren los procesos "reales". Al

contrario, es posible considerar que los discursos sobre la naturaleza se constituyen y son constituidos por prácticas específicas y por los paisajes resultantes (Sluyter, 1999; Willems-Braun, 1997).

En este caso, el discurso dominante es el imaginario centrado en el árbol del "sublime romántico", o la pasión por los árboles como cura a la crisis ambiental. Dado que los silvicultores indios, al igual que sus homólogos británicos, alemanes y estadounidenses, "lo que realmente queremos es plantar la mayor cantidad de árboles y restablecer el verdor lo antes posible", y dado que "ningún árbol es dañino" (Bachkheti, 1988: 150), el cambio ambiental en Pali se configura en la proliferación forestal. Donde los gestores consideran que "el bosque antiguo es más noble que la pradera" (Cronon, 1995: 86), la plantación de árboles adquiere la autoridad moral como "panacea ambiental" (Cohen, 1999). Incluso cuando la propagación de estas nuevas formas de bosque contribuye poco a la sostenibilidad, la plantación como práctica material cobra impulso mediante la práctica discursiva de la silvicultura. Utilizando este enfoque, que se pregunta sobre el papel de discursos específicos en la distinción del paisaje, nos acercamos a la comprensión del proceso de cambio en Godwar.

Sin embargo, esta explicación también parece incompleta. Evidentemente, el discurso y la práctica forestal están entrelazados, pero la división específica del paisaje y sus efectos contradictorios no se explican sólo como consecuencias de la práctica discursiva. ¿Por qué la insistencia en una mayor división del paisaje conduce a lo contrario: el aumento y la proliferación de híbridos? La respuesta tiene que ver con la relación entre las narrativas y las prácticas ambientales, pero requiere de un argumento más ambicioso.

La naturaleza nunca estuvo dividida

De esta manera, en las perspectivas ecológicas, marxistas y constructivistas encontramos tres explicaciones contrapuestas para comprender los cambios en la cubierta vegetal de Godwar. Los nuevos ecólogos insisten en que es *la naturaleza*, en última instancia, lo que explica el patrón de distribución de los bosques. La dinámica de sucesión funciona de forma

caótica, a pesar de los planes mecánicos de los silvicultores. Para los ambientalistas críticos, en cambio, es la *economía* moderna la que explica el crecimiento de la cobertura vegetal en el capitalismo, que se concreta en Rajastán en matorrales degradados y recursos perdidos. Para los constructivistas, es la construcción *social* de la naturaleza la que invita a las comunidades invasoras; una retórica centrada en los árboles describe los crecientes paisajes forestales.

Sin embargo, como sostiene Bruno Latour (1993), todas estas teorías se asemejan, pues representan una serie de declaraciones asimétricas que exigen la separación conceptual entre lo que se considera social y lo que se considera natural. Juntos, estos argumentos conforman la "constitución" de la modernidad, que afirma a un tiempo que la naturaleza produce la sociedad y que la sociedad produce la naturaleza, mientras vigila celosamente la frontera entre ambas.

En la primera declaración asimétrica, las reglas "duras" de la sucesión y la germinación desafían sin duda las comprensiones ingenuas de la naturaleza que elaboran observadores no científicos. Para Botkin y otros nuevos ecologistas, debemos observar la naturaleza *tal como es*, no como desearíamos que fuera. La naturaleza no es construida y dirime los malentendidos del diagnóstico socialmente erróneo de la silvicultura moderna. La naturaleza, por tanto, explica la verdad, pero la sociedad sólo explica la falsedad (errar en la gestión del suelo). Esto supone ignorar la propia "sociabilidad" de los hechos científicos de la silvicultura, aun cuando se producen en laboratorios y —como se ha mostrado aquí— establecidos en función de las categorías modernas.

La segunda declaración, en cambio, indica que es la construcción de esa naturaleza la que permite nuestro acceso a ella y que los hechos científicos en apariencia "blandos" son creados primero en la esfera "dura" de la sociedad. Aquí es la sociedad la que no está construida y la que explica los hechos naturales en la silvicultura moderna. Las condiciones sociales del laboratorio (o, en este caso, del vivero) impregnadas en las relaciones de poder determinan las reglas científicas del mundo "natural" (Latour, 1986; Nandy, 1988) y las construcciones sociales determinan la verdad

o falsedad de las distintas prácticas (conseguir una gestión "correcta" de la tierra). Sin embargo, esto implica ignorar las propias condiciones naturales de las que parte esta "construcción" social, así como la participación activa de objetos no humanos, como los árboles de juliflora, en la transformación del suelo.

Por último, el análisis marxista, haciendo uso de la noción de dialéctica, afirma que se trata de ambas cosas: la naturaleza produce la sociedad y la sociedad produce la naturaleza. Aquí, la primera afirmación puede utilizarse para evadir a los relativistas "no científicos" (Smith, 1996), mientras que la segunda es útil para reprender a los científicos deterministas (Peet, 1985). Los bosques y otros recursos naturales son "blandos" a medida que son explicados por una base social/económica "dura", pero esta misma base también es "blanda", al ser constituida por las leyes de hierro de los hechos naturales materiales (Foster, 2000). Esta crítica separa una explicación de la otra, y permite que ambas prosperen de manera aislada.

Juntos, estos tres enfoques críticos nos conducen a la comprensión de la compleja dinámica de sistemas como el de Kumbhalgarh. Sin embargo, no logran explicar la notable hibridez del paisaje y, al reproducir la separación moderna entre naturaleza y sociedad, no permiten cuestionar en realidad las estrategias de gestión moderna y autoritaria que se observan. Las llanuras agrícolas de Godwar continúan siendo el espacio social de la economía moderna donde prevalece la ciencia social tradicional. El bosque de colina pertenece al mundo de la naturaleza, donde los modelos de las ciencias duras predicen y dirigen el cambio. El contrato silencioso, como observa Latour, consiste en nunca enunciar la contradicción entre estas posturas y mantener siempre la distinción moderna naturaleza-sociedad que permite la operación de las formas tradicionales de investigación y la ciencia. Los patrones de cambio de la cobertura vegetal evidentes en Godwar sugieren que este contrato ha fracasado. A pesar de la imagen moderna de una naturaleza y una sociedad aisladas, evidente tanto en la práctica forestal como en las teorías ecológicas y sociales que la explican, la naturaleza y la sociedad no están separadas. Las comunidades dominadas por juliflora, híbridos monstruosos conectados al entramado de lo "natural" y lo "social", insinúan el carácter no moderno del paisaje

modernizado. Muestran que el anhelo de la distinción conduce en realidad a la hibridación, y que poco o ningún progreso real se ha conseguido en la implantación de la constitución moderna en la práctica. La naturaleza nunca se separó de la sociedad, ya que ambas son indistinguibles en objetos, como las comunidades de juliflora, en el mundo que nos rodea. Así, los paisajes de Godwar *nunca han sido modernos*, precisamente debido a los esfuerzos que pretenden hacer que lo fueran (Latour, 1993).

Si los paisajes de Godwar nunca lograron dividir lo natural y lo social como lo exigen los ideales de la modernidad, no es porque sus gobernantes no fueran suficientemente modernos. Más bien, los ecólogos expertos del Estado eran demasiado modernos, lo que aseguró el fracaso de la distinción naturaleza-sociedad al intentar imponerla físicamente. Las ecologías híbridas resultantes no podían predecirse en su especificidad, pero pueden esperarse siempre que un paradigma de este tipo se utilice para medir y manejar el suelo. En resumen, es necesario encontrar nuevas formas de comprender y vivir en paisajes no modernos.

Vivir en paisajes no modernos

> *Mientras pretendes con entusiasmo leer el canon de tu ley*
> *en la naturaleza, procuras algo opuesto…*
> *Imponer vuestra moral, vuestro ideal, a la naturaleza.*
> Nietzsche dirigiéndose a los estoicos (1989: 15).

Los crecientes encuentros con paisajes y ecologías híbridas en todo el mundo demuestran que el fenómeno del cuasi-bosque no es único en absoluto. La invasión del mejillón cebra en los Grandes Lagos de Estados Unidos y Canadá es otro ejemplo de objetos que desafían la comprensión moderna. Como la mayoría de las especies invasoras, estos bivalvos llegaron debido a la actividad humana, en este caso el transporte marítimo, pero se propagaron mediante reglas complejas, poco relacionadas con la actividad humana. Causan "degradación" al competir con especies nativas (Pace *et al*., 1998), pero

también "rehabilitan" al limpiar la columna de agua de toxinas y sedimentos (Dobson y Mackie, 1998). ¿Qué hacemos con estas aparentes anomalías? Como se pregunta Latour (1993: 50): "¿Son humanas? ¿Humanas porque son obra nuestra? ¿Son naturales? ¿Naturales porque no son obra nuestra?". Si dejamos de responder a estas dos preguntas, daremos el primer paso para vivir en paisajes no modernos.

La creciente evidencia de estos paisajes no modernos sugiere, en primer lugar, cambios en cómo los geógrafos realizan sus análisis. Para la ciencia del cambio de uso y cobertura de suelo, el mundo que habitamos está repleto de paisajes cambiantes que exigen atención por parte de los investigadores. Sin embargo, los trabajos que vinculan los paisajes del presente y el futuro a las categorías del pasado —utilizando métodos de modelado como el análisis de cadenas de Markov (Geoghegan *et al*., 1998)— ignoran las características multilineales, sorprendentes y caóticas de los híbridos sociales/naturales y omiten las espirales de explicación en las relaciones naturaleza/sociedad. Asimismo, los esfuerzos por aislar el "impacto humano" encontrando o simulando momentos prehumanos "naturales" para evaluar el cambio, son también inadecuados para el estudio de los paisajes híbridos. No es que los paisajes están cambiando de una categoría discreta a otra —de bosque a pradera, por ejemplo—, como afirma la investigación hasta la fecha. Más bien, los paisajes se reproducen en formas mixtas, transponiendo unas especies a cambio de otras, creando formas totalmente nuevas y mal descritas por las definiciones tradicionales.

En términos de la práctica política, admitir y aceptar el carácter social del paisaje natural también puede resultar emancipador. Los "monstruos" engendrados por la modernidad no son ni más ni menos naturales que los anteriores, pero pueden tener efectos socio-naturales diferentes y específicos. Como señala Botkin (1990), el hecho de que el cambio sea inevitable no significa que todos los ritmos, tipos e intensidades del cambio sean deseables. Existe, por tanto, una necesidad apremiante de estudiar estos paisajes emergentes, no como desviaciones de tipos naturales, sino en cuanto a sus valores ecológicos y culturales. Estos valores desaparecen rápido cuando los paisajes se observan desde la óptica de la conservación racional (Adams, 1997). En lugar de confiar en la pericia de las instituciones modernas, que

históricamente han interpretado el mundo natural y social y cuya tarea ha sido durante mucho tiempo clasificar los híbridos del mundo, podríamos constituir un órgano más democrático. Siguiendo a Latour (1993: 142), la clasificación de los objetos sociales y naturales debe adoptar la forma de un debate, una lucha o un "parlamento de las cosas".

En Godwar, esto significa obligar a las autoridades del Departamento Forestal a renunciar a su exclusivo poder para decretar qué estado de la naturaleza puede ser más natural. También significa reducir el poder de los extensionistas expertos para definir qué sistema de producción puede ser más social. Las burocracias de la silvicultura "social" de monocultivos y el extensionismo agrario deben encontrarse con las ecologías híbridas de los hogares en un debate abierto. Sin embargo, cuando este encuentro es cada vez más necesario, la silvicultura para el desarrollo está en buena medida vinculada a un enfoque basado en "planes" que resulta restrictivo e inflexible, incluso para iniciativas de silvicultura social (Brechin, 1997). Estos planes se basan en modelos estáticos que reflejan de forma inadecuada el papel de los árboles y las hierbas como actores en las comunidades y los paisajes locales. Parece que las instituciones colectivas y descentralizadas son hoy más importantes que nunca, al igual que aquellas que se adaptan a las demandas sociales y ambientales en lugar de refugiarse en absolutos ecológicos para fundamentar las decisiones de manejo (Berkes, 1996).

Esto no significa por necesidad abandonar todos los esfuerzos gubernamentales de gestión ambiental en la India que, aunque imperfectos, suelen tener efectos complejos y potencialmente emancipadores (Rangan, 1997; Sivaramakrishnan, 1998). Al contrario, significa que el éxito de las nuevas instituciones de gestión estatal, como el programa de gestión forestal conjunta propuesto por el Gobierno indio, debe juzgarse en función de la relevancia de sus acciones para reintegrar los paisajes y las prácticas de producción local eliminados por la modernización, "volviendo a atar", en palabras de Castree y Braun (1998: 32, siguiendo a Latour, 1993), en lugar de "desenredar" interminablemente el nudo gordiano entre naturaleza y sociedad. Tampoco se trata de un llamado para volver a un fantástico "rico, auténtico y pasado humano premoderno" (Latour, 1999: 293) libre de la influencia de la tecnología. Por el contrario, puede adoptar y exigir

tecnologías contemporáneas, desarrollos de todo tipo, en especial los no modernos que hacen hincapié en la flexibilidad, la movilidad y la diversidad paisajística (Savory, 1988; Scoones, 1994).

Esta es, pues, la lección definitiva que el quehacer de la geografía en general puede obtener del estudio de caso sobre el cambio de la cobertura de suelo en Godwar; que los híbridos son inevitables, pero que su ritmo de proliferación y su trayectoria de cambio son producto de historias de específica planeación. Nuevas ecologías como estas, con pocos o ningún precedente en la historia natural anterior, se producen a un ritmo vertiginoso. La tarea de la investigación consiste en rastrear estas formas, sus orígenes específicos —discursivos, ecológicos, institucionales y económicos— y sus efectos concretos. Un programa de investigación que se deshaga de los supuestos de estabilidad, inmutabilidad y categorías universales en el proceso socio-natural será capaz de abrir nuevos caminos en la ciencia y la política del cambio ambiental.

Referencias

Abebe, T. 1994. Growth-performance of some multipurpose trees and shrubs in the semiarid areas of southern Ethiopia. *Agroforestry Systems*, *26*(3), 237-248.

Adams, W. M. 1997. Rationalization and conservation: ecology and the management of nature in the United Kingdom. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *22*(3), 277-291.

Al-Humaid, A. I. y M. O. A. Warrag. 1998. Allelopathic effects of mesquite (*Prodsopis juliflora*) foliage on seed germination and seedling growth of Bermuda grass (*Cynodon dactylon*). *Journal of Arid Environments*, *38*(2), 237-243.

Bachkheti, N. D. 1988. Assessment of the problem of wasteland plantations. En G. P. Maithani (ed.). *Wasteland development for fuel-wood and fodder production* (145-150). Government of India.

Beaumont, P. 1989. *Drylands: environmental management and development*. Routledge.

Behnke, R. H. e I. Scoones. 1993. Rethinking range ecology: implications for rangeland management in Africa. En R. H. Behnke e I. Scoones (eds.). *Range ecology at disequilibrium: new models of natural variability and pastoral adaptation in African savannas* (1-30). Overseas Development Institute.

Bell, D. 1976. *The cultural contradictions of capitalism.* Basic Books.

Berkes, F. 1996. Social systems, ecological systems, and property rights. En S. S. Hanna, C. Folke y K.-G. Maler (eds.). *Rights to nature: ecological, economic, cultural, and political principles of institutions for the environment* (87-110). Island Press.

Bernstein, R. J. (ed.). 1985. *Habermas and modernity.* MIT Press.

Bhalla, L. R. 1992a. Development of desert and waste land. En H. S. Sharma y M. L. Sharma (eds.). *Geographical facets of Rajasthan* (283-287). Kuldeep Publications.

Bhalla, L. R. 1992b. Physiography of Rajasthan. En H. S. Sharma y M. L. Sharma (eds.). *Geographical facets of Rajasthan* (14-24). Kuldeep Publications.

Bhandari, M. M. 1990. *Flora of the Indian desert.* MPS Repros.

Blaikie, P. 1985. *The political economy of soil erosion in developing countries.* Longman Scientific and Technical.

Blaikie, P. y H. Brookfield (eds.). 1987. *Land degradation and society.* Routledge.

Bogusch, E. R. 1951. Climatic limits affecting distribution of mesquite. *Texas Journal of Science*, *3*, 554-558.

Botkin, D. B. 1995. *Our natural history: the lessons of Lewis and Clark.* Penguin Putnam.

Botkin, D. B. 1990. *Discordant harmonies: a new ecology for the twenty-first century.* Oxford University Press.

Brechin, S. R. 1997. *Planting trees in the developing world: a sociology of international organizations.* Johns Hopkins University Press.

Bryant, R. L. 1996. The greening of Burma: political rhetoric or sustainable development? *Pacific Affairs*, *69*(3), 341-359.

Bürger, P. 1984. *Theory of the avant-garde.* University of Minnesota Press.

Castree, N. y B. Braun. 1998. The construction of nature and the nature of construction. En B. Braun y N. Castree (eds.). *Remaking reality: nature at the millennium* (3-42). Routledge.

Chief Wildlife Warden, Forest Department. 1996. *Management Plan: Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary 1996-1997 to 2000-2001.* Rajasthan Forest Service.

Cohen, S. 1999. Promoting eden: tree-planting as the environmental panacea. *Ecumene*, *6*(4), 424-446.

Cronon, W. 1995. The trouble with wilderness, or getting back to the wrong nature. En W. Cronon (ed.). *Uncommon ground: rethinking the human place in nature* (69-90). W. W. Norton and Co.

Dallmayr, F. 1993. Modernity in the crossfire: comments on the postmodern turn. En J. P. Jones, W. Natter y T. R. Schatzki (eds.). *Postmodern contentions: epochs, politics, space* (17-38). Guilford Press.

Demeritt, D. 1994. Ecology, objectivity, and critique in writings on nature and human societies. *Journal of Historical Geography*, *20*, 22-37.

Dhaberia, S. S. 1984. Intensification of desertification hazard through Sambhar Gap: a problem of environmental degradation in Indian arid zone [ponencia]. *18th International Symposium on Remote Sensing of Environment*, París, octubre.

Dobson, E. P. y G. L. Mackie. 1998. Increased deposition of organic matter, polychlorinated biphenyls, and cadmium by zebra mussels (*Dreissena polymorpha*) in western Lake Erie. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 55(5), 1131-1139.

Fairhead, J. y M. Leach. 1996. *Misreading the African landscape: society and ecology in a forest-savanna mosaic.* Cambridge University Press.

Fairhead, J. y M. Leach. 1994. Contested forests. *African Affairs*, *93*, 481-512.

Foster, J. B. 2000. *Marx's ecology: materialism and nature.* Monthly Review Press.

Geoghegan, J., L. J. Pritchard, Y. Ognevea-Himmleberger, R. R. Chowdhury, S. Sanderson y B. L. Turner. 1998. "Socializing the pixel" and "pixelizing the social" in land-use and land-cover change. En D. Liverman, E. F. Morna, R. R. Rindfuss y P. C. Stern (eds.). *People and pixels: linking remote sensing and social science* (51-69). National Academy Press.

Giddens, A. 1990. *The consequences of modernity.* Stanford University Press.

Gobierno de la India. 1998. *Agricultural statistics: Rajasthan, 1996-1997.* Directorate of Economics and Statistics.

Gobierno de la India. 1995a. *Statistical abstract Pali.* Directorate of Economics and Statistics.

Gobierno de la India. 1995b. *Statistical abstract Rajasthan.* Directorate of Economics and Statistics.

Gobierno de la India. 1976. *Report of the National Commission on Agriculture.* Ministry of Agriculture and Irrigation.

Gobierno de la India, Department of Economics and Statistics. 1998. *Statistical abstract Rajasthan.* Directorate of Economics and Statistics.

Gobierno de la India, Department of Economics and Statistics. 1997. *Statistical abstract Rajasthan.* Directorate of Economics and Statistics.

Gobierno de la India, Department of Economics and Statistics. 1979. *Statistical abstract Rajasthan.* Directorate of Economics and Statistics.

Goin, P. 1996. *Humanature.* University of Texas Press.

Goldman, M. 1991. Cultivating hot peppers and water crisis in India's desert: toward a theory of understanding ecological crisis. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, *23*(4): 19-29.

Graetz, D. 1994. Grasslands. En W. B. Meyer y B. L. Turner (eds.). *Changes in land use and land cover: a global perspective* (125-147). Cambridge University Press.

Gupta, A. 1998. *Postcolonial developments: agriculture in the making of modern India*. Oxford University Press.

Harvey, D. 1990. *The condition of postmodernity.* Blackwell Publishers.

Hocking, D. (ed.). 1993. *Trees for drylands.* Oxford and IBH Publishing.

Horkheimer, M. y T. Adorno. 1972. *The dialectic of enlightenment*. Herder and Herder.

Jadhav, R. N., M. M. Kimothi y A. K. Kandya. 1993. Grassland mapping monitoring of Banni, Kachchh (Gujarat) using remotely-sensed data. *International Journal of Remote Sensing*, *14*(17), 3093-3103.

Jain, R. R. 1992. Botanical and phytogenic resources of Rajasthan. En H. S. Sharma y M. L. Sharma (eds.). *Geographical facets of Rajasthan* (68-75). Kuldeep Publications.

Jarosz, L. 1996. Defining deforestation in Madagascar. En R. Peet y M. Watts (eds.). *Liberation ecologies: environment, development, social movements* (148-164). Routledge.

Jewitt, S. 1995. Europe's "others"? Forestry policy and practices in colonial and postcolonial India. *Environment and Planning D: Society and Space*, *13*, 67-90.

Kepe, T. e I. Scoones. 1999. Creating grasslands: social institutions and environmental change in Mkambati area, South Africa. *Human Ecology*, *27*(1), 29-54.

Köhler-Rollefson, I. y H. S. Rathore. 1998. *NGO strategies for livestock development in Western Rajasthan (India): an overview and analysis.* League for Pastoral Peoples.

Kummer, D. M. 1995. The political use of forestry statistics in the postwar period. *Crime Law and Social Change*, *22*, 163-180.

Latour, B. 1999. *Pandora's hope: essays on the reality of science studies.* Harvard University Press.

Latour, B. 1993. *We have never been modern.* Harvard University Press.

Latour, B. 1986. *Laboratory life: the construction of scientific facts.* Princeton University Press.

Lee, S. G., E. J. Russell, R. L. Bingham y P. Felker. 1992. Discovery of thornless, nonbrowsed, erect tropical *Prosopis* in three-year-old Haitian progeny trials. *Forest Ecology and Management*, *48*(1-2), 1-13.

Lodrick, D. O. 1994. Rajasthan as a region: myth or reality. En K. Schomer, J. L. Erdman, D. O. Lodrick y L. I. Rudolph (eds.). *The idea of Rajasthan: explorations in regional identity. Vol. 1. Constructions* (pp. 1-44). Manohar and the American Institute of Indian Studies.

Maithani, G. P. 1988. Preface. En G. P. Maithani (ed.). *Wasteland development for fuelwood and fodder production* (V-VII). Forest Research Institute and Colleges.

Malhotra, P. P. y K. K. Sharma. 1988. Need for defining wasteland for afforestation purposes. En G. P. Maithani (ed.). *Wasteland Development for fuel-wood and fodder production* (3-10). Forest Research Institute and Colleges.

Mann, H. S. y S. K. Saxena. 1980. *Khejri* (Prosopis cineraria*) in the Indian desert: its role in agroforestry.* ICAR / Central Arid Zone Research Institute.

Meyer, W. B. y B. L. Turner (eds.). 1994. *Changes in land cover: a global perspective.* Cambridge University Press.

Muldavin, J. S. 1996. The political ecology of agrarian reform in China: the case of Helongjiang province. En R. Peet y M. Watts (eds.). *Liberation ecologies: environment, development, social movements* (227-259). Routledge.

Muthana, K. D. 1988. Afforestation of arid zones wastelands for fuelwood and fodder production. En G. P. Maithani (ed.). *Wasteland development for fuel-wood and fodder production* (40-42). Forest Research Institute and Colleges.

Nandy, A. 1988. Introduction: science as a reason for state. En A. Nandy (ed.). *Science, hegemony, and violence* (1-23). Oxford.

Nietzsche, F. 1989. *Beyond good and evil: prelude to a philosophy of the future*. Vintage Books.

Noor, M., U. Salam y M. A. Khan. 1995. Allelopathic effects of *Prosopis juliflora swartz. Journal of Arid Environments*, *31*(1), 83-90.

O'Connor, J. 1996. The second contradiction of capitalism. En T. Benton (ed.). *The greening of marxism* (197-221). Guilford Press.

O'Connor, M. 1994. On the misadventures of capitalist nature. En M. O'Connor (ed.). *Is capitalism sustainable?* (125-151). Guilford Press.

Pace, M. L., S. E. G. Findlay y D. Fisher. 1998. Effects of an invasive bivalve on the zooplankton community of the Hudson River. *Freshwater Biology*, *39*(1), 103-116.

Peet, R. 1985. The social origins of environmental determinism. *Annals of the Association of American Geographers*, *75*, 309-333.

Peet, R. y M. Watts. 1996. Liberation ecology: development, sustainability, and environment in the age of market triumphalism. En R. Peet y M. Watts (eds.). *Liberation ecologies: environment, development, social movements* (1-45). Routledge.

Rajputana-Gazetteers. 1908. *The Western Rajputana states residency and bikaner.* Vintage Books.

Rangan, H. 1997. Indian environmentalism and the question of the state: problems and prospects for sustainable development. *Environment and Planning A*, *29*(12), 2129-2143.

Robbins, P. 2001. Fixed categories in a portable landscape: the causes and consequences of land-cover categorization. *Environment and Planning A*, *33*, 161-179.

Robbins, P. 2000. The practical politics of knowing: state environmental knowledge and local political economy. *Economic Geography*, *76*(2), 126-44.

Robbins, P. 1998a. Authority and environment: institutional landscapes in Rajasthan, India. *Annals of the Association of American Geographers*, *88*(3), 410-435.

Robbins, P. 1998b. Paper forests: imagining and deploying exogenous ecologies in arid India. *Geoforum*, *29*(1), 69-86.

Roy, B. B., and S. Pandy. 1971. Expansion or contraction of the Great Indian Desert. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, *36*(6): 331-334.

Savory, A. 1988. *Holistic resource management.* Island Press.

Saxena, V. S. 1993. *Useful trees, shrubs, and grasses.* Inter-cooperation.

Scott, J. 1998. *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed.* Yale University Press.

Scoones, I. (ed.). 1994. *Living with uncertainty: new directions in pastoral development in Africa.* Intermediate Technology Publications.

Shankarnarayan, K. A. 1987. Conference on food systems and dryland agriculture: inaugural address. En M. Shafi y M. Raza (eds.). *Dryland agriculture in India* (1-5). Rawat.

Sharma, R. C. y P. Kundra. 1984. Indian desert: process and pattern of desertification. En H. G. Mensching y R. C. Sharma (eds.). *Resource management in dry-lands* (61-72). M. L. Gupta Publications.

Shiva, V. 1991. *The violence of the green revolution.* Third World Network.

Sivaramakrishnan, K. 1998. Co-managed forests in West Bengal: historical perspectives on community and control. *Journal of Sustainable Forestry*, *7*(3-4), 23-51.

Sluyter, A. 1999. The making of the myth in postcolonial development: material conceptual landscape transformation in sixteenth-century Veracruz. *Annals of the Association of American Geographers*, *89*(3), 377-401.

Smith, N. 1996. The production of nature. En G. Robertson, M. Mash, L. Tickner, G. Robertson, J. Bird, B. Curtis y T. Putnam (eds.). *Future natural: nature/science/culture* (35-54).

Soper, K. 1995. *What is nature?* Blackwell Publishers.

State of Rajasthan. 1999a. *Bali and Desuri irrigation statistics.* Department of Irrigation.

State of Rajasthan. 1999b. *State of Rajasthan livestock census.* Department of Animal Husbandry.

Tod, J. 1987. *Annals and antiquities of Rajasthan*. Motilal Banarsidass. (Original de 1829).

Turner, B. L., D. Skole, S. Sanderson, G. Fischer, L. Fresco y R. Leemans. 1995. *Land-use and land-cover change: science/ research plan*. International Council of Scientific Unions.

Turner, B. L. y W. B. Meyer. 1991. Land use and land cover in global environmental change: considerations for study. *International Social Science Journal*, *43*(4), 669-77.

Turner, B. L., R. H. Moss y D. L. Skole. 1993. *Relating land use and global land-cover change: a proposal for an IGBPHDP core project.* International Geosphere-Biosphere Programme.

Turner, M. D. 1999. Merging local and regional analyses of land-use change: the case of livestock in the Sahel. *Annals of the Association of American Geographers*, *89*(2), 191-219.

Verma, V. 1984. Desert development in Rajasthan. En H. G. Mensching y R. C. Sharma (eds.). *Resource management in drylands: the Rajasthan example* (pp. 15-28). Rajesh Publications.

Warrag, M. 1994. Autotoxicity of mesquite (*Prosopis juliflora*) pericaps on seed germination and seedling growth. *Journal of Arid Environments*, *27*(1), 79-84.

Warren, A. y F. B. Goldsmith. 1983. An introduction to nature conservation. En F. B. Goldsmith y A. Warren (eds.). *Conservation in perspective* (2-15). Wiley.

Wiegers, E. S., R. J. Hijmans, D. Herve y L. O. Fresco. 1999. Land-use intensification and disintensification in the upper Canete Valley, Peru. *Human Ecology*, *27*(2), 319-40.

Willems-Braun, B. 1997. Buried epistemologies: the politics of nature in (post)colonial British Columbia. *Annals of the Association of American Geographers*, *87*(1), 3-31.

Williams, M. 1994. Forests and tree cover. En W. B. Meyer y B. L. Turner (eds.). *Changes in land use and land cover: a global perspective* (97-124). Cambridge University Press.

Xenos, N. 1989. *Scarcity and modernity.* Routledge.

Zimmerer, K. 1994. Human geography and the new ecology: the prospect and promise of integration. *Annals of the Association of American Geographers*, *84*(1), 108-125.

18. Empoderando el lugar: multilocalidad y multivocidad[1]

Margaret Critchlow Rodman

Resumen: El concepto de voz ha recibido considerable atención recientemente en la antropología. Este artículo sugiere que el concepto de lugar también requiere ser repensado. Explora las maneras en las que el lugar, la voz y el tiempo son una construcción social y cultural politizada. Se aplican conocimientos de la geografía y la sociología para el estudio antropológico del lugar, haciendo uso de investigaciones en Melanesia, que incluyen el trabajo de campo de la autora en Vanuatu. El artículo concluye que prestar atención a la multilocalidad, además de la multivocalidad, puede destacar el lugar conceptualmente e incentivar la comprensión de la construcción social compleja del significado espacial.

Se podría hacer una crítica de esta devaluación del espacio que ha prevalecido durante generaciones. Se había tratado el espacio como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil. Por otro lado, el tiempo representaba la riqueza, la fecundidad, la vida y la dialéctica. Si uno se atrevía a hablar del espacio eso significaba una hostilidad al tiempo. Significaba, como dicen los tontos, que uno estaba "negando la historia", que uno era un "tecnócrata". No comprendieron que rastrear las formas de la implantación, la delimitación y demarcación de los objetos, los modos de tabulación, la organización de los dominios, significaba poner de manifiesto los procesos "históricos no hace falta decir" del poder (Foucault, 1980: 70).

El lugar es un problema en la teoría antropológica contemporánea. El problema del lugar surge, paradójicamente, porque con frecuencia el significado del lugar parece evidente. Como antropólogos, y como personas normales viviendo en el mundo, estamos tan situados en el lugar como

1 Publicado originalmente en: Margaret Critchlow Rodman, 1992, "Empowering place: multilocality and multivocality", *American Anthropologist*, 94(3), 640-656.

en el tiempo o la cultura. La gente que estudiamos en países no occidentales y menos industrializados puede tener relaciones más inmediatas y llenas con el lugar, en tanto sus relaciones tiempo-espacio se hallan menos fragmentadas y retienen más control local sobre sus paisajes físicos y sociales. Sin embargo, aquellos antropólogos que se esfuerzan en guiar a sus alumnos a través de los campos de minas de la conceptualización de la cultura con frecuencia suponen que el lugar no es problemático. Es tan solo una ubicación. Es donde la gente hace cosas. Este artículo analiza de forma detenida el lugar que otros le han concedido a la cultura. Sugiere cómo los antropólogos pueden aprender del pensamiento actual acerca del lugar en la geografía. Se aplica el pensamiento antropológico a la voz y el lugar, en especial los conceptos de multivocalidad y multilocalidad, utilizando ejemplos de la etnografía de Melanesia y trabajo de campo en Vanuatu (antaño las Nuevas Hébridas).

El artículo aborda el problema antropológico del lugar desde dos perspectivas estratégicas, explorando en el camino parte del terreno intermedio. La primera es el lugar como una construcción antropológica. Los lugares en la escritura antropológica han sido equiparados con los locales etnográficos. Como tal, no tendrían que ser problematizados. Simplemente eran espacio, "lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil" del lamento de Foucault. Se convirtieron en los escenarios, aunque a menudo algo exóticos, donde las cosas ocurrieron.[2] Los antropólogos han realizado una crítica de los lugares como estrategias de localización (Fardon, 1990), o las ideas (Appadurai, 1988a; 1988b); por ejemplo, la manera como la India ha llegado a ejemplificar el concepto de jerarquía. Otros se han opuesto al uso de lugares como metonimias donde un local representa, de manera inapropiada, una región entera (Fernandez, 1988), como, por ejemplo, Andalucía ha llegado a representar a toda España. Pero se ha prestado insuficiente atención a la conceptualización del lugar en la antropología como algo más que un escenario físico, o un blanco pasivo para los

2 Aunque por lo general el lugar ha jugado un rol pasivo en la etnografía, algunos han tomado más en serio su interacción con la vida social desde los tiempos más tempranos de la antropología. Durkheim, Mauss y Morgan se interesaron por el juego entre el ambiente construido y la sociedad. Para una discusión sobre las teorías tempranas de la acomodación y adaptación de la gente y los lugares, véase Lawrence y Low (1990: 456-457).

sentimientos primordiales de vínculo que emanan de la "cosas dadas" de la vida (Geertz, 1973: 259).[3]

Los lugares no son contenedores inertes. Son construcciones politizadas, culturalmente relativas, específicas en la historia, locales y múltiples. Los antropólogos han aceptado la polifonía de voces que escuchan y representan en la etnografía. Lo que Appadurai (1988a: 17) llama "el problema de la voz ('hablando para' y 'hablando a')", puede cruzarse con "el problema de lugar ('hablando desde' y 'hablando de')", pero desde luego el primero ha recibido más atención crítica. Uno de los objetivos de este artículo es mostrar que como concepto antropológico el lugar es tan complejo como el concepto de voz.

Un problema adicional es que tanto lugar como voz no solo son creaciones académicas. Los lugares no están definidos solamente por los investigadores o por los temas que les ocupa en entornos particulares. Los lugares en el mundo de nuestra investigación no son creaciones totalizadas, esencializadas y occidentales.

Esto nos lleva al segundo punto de vista del artículo, la idea de que los lugares son socialmente construidos. Aquí se pone el énfasis en los lugares en el mundo, en la agencia de individuos y de fuerzas más allá del control individual. Los lugares tienen significados múltiples que están construidos en el espacio. Las realidades físicas, emocionales y experienciales que los lugares tienen para sus habitantes en momentos particulares necesitan ser comprendidas, aparte de su creación como lugares de la etnografía. Aunque es cierto que los antropólogos crean lugares en sus etnografías, no poseen ninguna patente en el campo de construcción de lugares.

Yo defiendo un enfoque del lugar distinto del tradicional enfoque etnográfico centrado en el entorno. Defiendo un uso más crítico de lo común en la antropología contemporánea y tomo muy en serio la dimensión del poder. Formulo preguntas (y no intento contestarlas todas) acerca de cómo el estudio antropológico de lugares se relaciona con la experiencia de vivir

3 Una excepción notable es el número temático de *Cultural Anthropology*, editado por Ferguson y Gupta (1992), que llevaba por título "Espacio, identidad, y la política de la diferencia", que apareció cuando este artículo estaba preparándose.

en lugares. En el proceso, exploro la idea de la multilocalidad como una manera de "construir mundos regionales en la experiencia", por tomar prestada la frase evocativa de Nancy Munn (1990).

El artículo se inicia con un repaso selectivo del estudio del lugar en la geografía contemporánea, haciendo hincapié en los trabajos que parecen especialmente apropiados para la antropología. A continuación, evalúo los nuevos enfoques sobre el lugar y el concepto relacionado de región en antropología. La siguiente sección presta atención particular al lugar como experiencia vivida. Utilizando estudios recientes de Melanesia sobre el poder y los paisajes sociales (Lindstrom, 1990), señaló algunas maneras en que el trabajo de Foucault se aplica a la comprensión etnográfica de la multivocalidad. Sugiero cómo la perspectiva de Giddens (1990) acerca del distanciamiento del espacio-tiempo puede ser útil para comprender la multivocalidad y la multilocalidad en lugares no occidentales. Ejemplos de mi propio trabajo de campo en las Vanuatu ilustran un enfoque multivocal y multilocal para la comprensión antropológica de la construcción social del lugar.

Los geógrafos y el lugar

En cierta medida, el concepto de lugar y, a mayor escala, el de región han languidecido incluso en la geografía. La "corología", el estudio de región y lugar, fue marginalizada como un tema teórico en las décadas de los cincuenta y sesenta, cuando los geógrafos, al igual que los antropólogos del periodo, buscaban hacer más científica a su disciplina. Esto no significa que los estudios regionales desaparecieran. Incluso dentro de Melanesia su contribución continua era evidente en la década de los setenta (Brookfield y Hart, 1971). Pero los estudios regionales se habían vuelto en gran medida un campo descriptivo.

Ahora los geógrafos expresan un interés renovado en los conceptos teóricos de lugar y región.[4] Entrikin (1989: 40) considera este interés como parte de un esfuerzo para "redirigir la investigación geográfica hacia una

4 Véanse, por ejemplo, los trabajos en Agnew y Duncan (1989a), y en Buttimer y Seamon (1980).

preocupación por la riqueza de la experiencia humana y una comprensión de la acción humana […] Se toman en serio el significado cultural de la vida cotidiana".

En su introducción reciente a la geografía sistémica regional, Dov Nir (1990: 59-60) observa que existen dos puntos de vista opuestos de la "región" en la geografía contemporánea. Para algunos, "región" es solo un concepto, una construcción mental o una herramienta analítica. Para otros, las regiones son realidades que existen en el espacio. De manera similar los antropólogos mantienen estas dos visiones en apariencia opuestas del lugar, como sugieren los dos puntos de vista desde donde se organiza este artículo —o sea, lugar como: (1) una construcción antropológica para referirse al "escenario" o la localización de los conceptos y como (2) la experiencia espacializada, socialmente construida—.[5] Nir (1990: 10) propone que los dos puntos de vista pueden ser compatibles en tanto que los estudios regionales son de hecho estudios de lugares, relaciones espaciales (el "espacio social" de Claval [1984]), y los valores que se unen a los lugares y las relaciones. Otros llamarían a esta concatenación el "espacio vivido".

Berdoulay (1989: 130) define el "espacio vivido" (*l'espace vécu*) como incluyendo el espacio de la vida (territorio, áreas de actividad), el espacio social y los valores vinculados con ambos. Observa que el interés actual en el espacio vivido, en especial entre los autores franceses, deriva del posibilismo de Vidal de la Blanche (1917) para el desarrollo de los estudios regionales y el análisis de lugar. Un aspecto de la geografía vidaliana se enfocó en la tensión entre la influencia que los humanos ejercen sobre sus ambientes y, de manera recíproca, los impactos que los ambientes tienen sobre ellos. Berdoulay (1989: 126) sugiere que "el empujón vidaliano en la geografía es compatible con el interés actual por el lugar. Estuvo muy atento al ambiente tal como lo experimentan las personas. La preocupación por los planes, inquietudes, iniciativas y esfuerzos le dio a la geografía los

5 Un problema de importancia aquí es el hecho que el analista social es siempre parte del fenómeno que estudia. Véanse los comentarios de Giddens (1990: 45, y otras publicaciones más tempranas) acerca de la reflexividad del conocimiento y la doble hermenéutica de la vida social moderna.

matices humanistas que con frecuencia han sido comentados por autores no franceses (Buttimer, 1971; Ley y Samuels, 1978).

En este sentido, los lugares no solo aparecen en las narrativas de habitantes (y geógrafos), sino que también son narrativas por derecho propio: "Un lugar llega a ser explícitamente a través del discurso de sus habitantes, y particularmente a partir de la retórica que promueve. Así el discurso del geógrafo utiliza los mismos medios que las personas emplean cuando definen su propio lugar" (Berdoulay, 1989: 135; Tuan, 1991). Entrikin (1991: 3) sugiere que un discurso así mezcla productivamente las distinciones entre el lugar como un concepto analítico, de un lado, y como "situacionalidad" en un mundo real, por el otro: "Comprendemos la especificidad del lugar desde un punto de vista, y por esta razón el estudiante del lugar depende de formas de análisis que se ubican entre el punto de vista centrado (subjetivo, experiencial) y descentrado (objetivo, trascendental); tales formas pueden ser descritas como síntesis en forma de narrativa". El libro de Entrikin, *The betweenness of place*, sigue argumentando una posición intersticial a los dos puntos de vista, una que puede sugerir una resolución de su contradicción aparente también para los antropólogos, según Entrikin:

> Esta brecha entre las concepciones existencialistas y naturalistas del lugar parece ser infranqueable, y solo se ensancha cuando se adopta un punto de vista descentrado [objetivo]. Lo más cercano que llegamos a poder atender los dos lados de esta brecha sería desde un punto medio, un punto que nos conduce hacía la vasta esfera de las formas narrativas. Desde esta posición logramos un punto de vista desde los dos lados de la brecha. Obtenemos la sensación de estar "en un lugar" y "en una ubicación", de estar en el centro y en un punto en un mundo sin centro. Ignorar uno u otro aspecto de este dualismo sería no comprender la experiencia moderna del lugar (1991: 134).

Un problema aquí es la tendencia a privilegiar la comunicación verbal. Irónicamente, mientras esto ha sido muy común en la antropología, hasta hace relativamente poco, esto no había sido habitual en la geografía. La falta de atención al discurso ahora preocupa a aquellos geógrafos interesados en la

narrativa. Tuan (1991, 684) señala el descuido del habla como "un hueco curioso en la literatura extensiva y creciente sobre el lugar." Argumenta la necesidad de una expansión de la geografía humana para incluir el habla y la escritura como elementos integrales tanto de la construcción de lugares como de la investigación geográfica. El enfoque que propone "es cultural- las distintas formas en que las diferentes sociedades usan el habla y/o la palabra escrita para dar cuenta del lugar" (Tuan 1991, 695)[6]. Pero los lugares también llegan a hacerse mediante la praxis, no sólo por medio de las narrativas. Hay que tener cuidado con asumir que los discursos de los habitantes y de los geógrafos serán consistentes y que todos los habitantes (y todos los geógrafos) compartirán puntos de vista similares. Una breve mirada a la escritura antropológica reciente sobre la etnografía y el repensar de la cultura pondría en duda estas suposiciones. Entrikin, pero no Tuan, parece ser muy consciente del trabajo reciente en esta área.

En un comentario que evoca la cita de Foucault al inicio de este artículo, el geógrafo urbano marxista David Harvey (1989) señala que las relaciones de tiempo-espacio son fundamentales para las relaciones sociales; sin embargo, el tiempo ha recibido mucha más atención que el espacio:[7]

> La prioridad que se ha dado al tiempo por encima del espacio no es en sí misma errónea. De hecho, refleja la evolución de las prácticas sociales de manera importante. Lo que falta, sin embargo, es una apreciación de las prácticas que subyacen a esta prioridad. Solo así se podrían comprender aquellas situaciones donde la ubicación, lugar y la espacialidad se imponen como fuerzas poderosas y autónomas en los asuntos humanos, tales situaciones abundan (1989: 175).

Harvey bromea que "el asunto del espacio es demasiado importante para dejarlo exclusivamente a los geógrafos". En la siguiente sección, voy a indagar acerca

6 Harris (1991) también recalca la importancia creciente del contexto cultural cuando la geografía histórica se vuelve más interdisciplinaria. Relph (1991: 102) observa algo similar con respecto a la geografía posmoderna.

7 Este punto de vista lo comparte Soja (1989: 11), quien hace un llamado para la espacialización de la narrativa de las explicaciones históricas integrales a la geografía marxista.

de lo que los antropólogos han dicho en tiempos recientes sobre este tema, empezando con el asunto de la voz, para regresar luego a la cuestión del tiempo.

Enfoques nuevos desde la antropología para el estudio del lugar

A pesar de un renovado interés por la "voz" en la antropología, el "lugar", de manera sorprendente, ha recibido poca atención y casi ninguna reevaluación crítica. Existe poco reconocimiento de que el lugar es más que el sitio, la ubicación de la acción, el escenario donde ocurren las cosas. Los antropólogos harían bien en seguir el renovado interés de los geógrafos (Agnew y Duncan, 1989b: 2) en la reunificación de la *ubicación* (o sea la distribución espacial de la actividad socioeconómica; por ejemplo, las redes de comercio), el *sentido del lugar* (o el vínculo con el lugar) y la localidad (el entorno donde ocurre una actividad social particular, como una iglesia), para así lograr una comprensión más completa de los lugares como construidos por la práctica social y cultural.

La idea, muy bien establecida en la geografía, de que los lugares producen significado y que el significado puede estar fundado en lugar, aún no ha logrado atraer mucho interés teórico en la antropología. El artículo de Denise Lawrence y Setha Low (1990) en *Annual Reviews in Anthropology* representa un esfuerzo para corregir esta falta, aunque su preocupación se centra en el ambiente construido, más que con el lugar en términos generales. Ellos, y otros en el Grupo de Lugar y Espacio, han logrado contribuciones importantes para el estudio antropológico del lugar y el espacio. Este trabajo merece más atención teórica crítica.[8]

Con demasiada frecuencia, el lugar se subsume al problema de voz. La geografía se vuelve totalmente metafórica. Por ejemplo, Rosaldo habla de los episodios de la serie de televisión *Miami Vice* como lugares que son "el sitio de la implosión del tercer mundo en el primero" (Rosaldo, 1988: 85).

8 El Grupo de Lugar y Espacio se reúne en cada reunión anual de la American Anthropological Association y mantiene a sus miembros informados de sesiones y reuniones relacionadas con el lugar por medio de un boletín.

Por otra parte, los lugares han llegado a representar problemas particulares en la antropología. Entonces, por ejemplo, es muy probable que los que estudian Melanesia como "especialistas de área" investigan la adopción o invención de la tradición. Appadurai (1988a: 16) define este "problema del lugar" como "el problema de las ubicaciones culturalmente definidas a las cuales se refieren las etnografías". En su opinión, los lugares etnográficos se vuelven metonimias para ciertas imágenes e ideas antropológicas. Como ejemplo, traza la vinculación de la idea de la jerarquía con la India. Al animar a los antropólogos a contestar tales "estereotipos topológicos", en efecto, Appadurai aboga por un enfoque regional. Las ideas que parecen representar la esencia de ciertos lugares serían reconocidas, en este enfoque, como meras localizaciones o fusiones de ideas de todas partes (Appadurai, 1988b: 46). Además, promueve "la producción y apreciación de etnografías que enfatizan la *diversidad* de temas que pueden ser investigados de manera fructífera en *cualquier* lugar" (1988b: 46, subrayado en el original).

El "problema del lugar", como lo define Appadurai, se trata en profundidad en un número de *Cultural Anthropology* (1988). Mi queja es que el "problema", como él lo define, pasa por alto un punto más amplio. Es hora de que se reconozca que los lugares, como las voces, son locales y múltiples. Para cada habitante, un lugar tiene una realidad única, donde el significado es compartido con otras personas y lugares. Los vínculos en estas cadenas de lugares experimentados están forjados por la cultura y la historia.

Textos recientes, como evidencia el número temático de *Cultural Anthropology* sobre lugar y voz, sufren de una falta de mirada crítica hacia el lugar como un concepto antropológico. En el mejor de los casos, el lugar es percibido como una localidad, y el "problema" se define como si el lugar fuera solo una creación antropológica, una cárcel metonímica que afecta a los nativos, en los términos de Appadurai (1988b: 37). Desde este punto de vista, esta "cárcel" se produce cuando ciertas imágenes llegan a representar áreas particulares. Desde luego, la cosificación del lugar entraña peligros (A. Strathern, 1990: 376). La hegemonía de tópicos particulares de investigación, como el intercambio, es tan evidente en la etnografía de Melanesia como el ejemplo de la India y la jerarquía que interesa a Appadurai. Pero

sería arrogante y algo inocente asumir que los lugares sólo existen como las localizaciones de voces antropológicas totalizadas. Se necesita que los antropólogos se vuelvan más conscientes de los sesgos occidentales y no asuman que "lugar" significa aquellos lugares definidos por etnógrafos extranjeros y metropolitanos.

Devolver el control acerca de los significados del lugar a sus productores legítimos requiere una reconsideración de cuestiones de poder y agencia que implican tanto a la antropología como a las personas que estudiamos. En términos de Entrikin (1991), hay que aceptar la "intermediación del lugar" en contextos antropológicos, como sujeto y objeto. "Lo que se necesita cancelar", sostiene Marilyn Strathern (1988: 94), "es la base de la comparación" para que nosotros, como occidentales, dejemos de privilegiar nuestro propio punto de vista que margina a todos los otros lugares. Más que ver los lugares como ejemplares de *nuestros* conceptos, deben ser vistos en diversos grados, los productos socialmente construidos a partir de los intereses de los *otros* (tanto material como ideacional) y como reglas mnemónicas de las experiencias de *otros*. Las competencias y las tensiones entre diferentes actores e intereses en la construcción del espacio también necesitan ser exploradas. Debemos considerar lo que Munn (1990) ha llamado "la construcción de mundos regionales en la experiencia".

Irónicamente el interés real de Munn en su fascinante artículo acerca de los mundos regionales es el tiempo, más que el espacio. En él sigue el rastro de la incorporación de un episodio de una transacción de *kula* a la construcción de eventos en otros lugares de la región unos seis años después. Quiere comprender cómo las personas se hacen conscientes y utilizan los eventos distantes del pasado como horizontes que pueden informar la acción en el presente:

> Mi intención es enfatizar que para el sujeto un mundo regional no está dado, sino que es vivido, como lo expresa Williams (1977: 129), en "formas singulares y en desarrollo" y creados en lo "viviente". En lugar de considerar la formación de un orden regional a través de la estructura y funcionamiento de las formas sociales dadas como los tipos de organización social, el intercambio o la comunicación (ver por ejemplo Werbner, 1977; Smith, 1976),

> estoy interesada en su formación continua en síntesis experimentales que los actores crean en las prácticas, y los eventos que suceden en sus términos (Munn, 1990: 2).

El espacio es solo un marco para la acción en el artículo de Munn. Pero por lo menos es un marco construido localmente. Se podría tomar más en serio el lugar ampliando su enfoque. ¿Qué ocurre si miramos tanto a los lugares como a los actores y a la formación continua de experiencia que se produce en el lugar particular o en una red de lugares? En otras palabras, en lugar de limitar el análisis al punto de vista del *actor* de un milieu *social* más amplio, como hace Munn, consideremos cómo los *lugares* específicos se implican de manera mutua en un milieu *geográfico* también. Los paisajes pueden ser "estaciones de escucha" hacia otros lugares (Munn, 1990).

La "historia del evento" de Munn es suficientemente similar a la idea de la narratividad del lugar del geógrafo Berdoulay como para sugerir una síntesis de los dos enfoques. Los dos son construcciones fenomenológicas, formadas por la cultura. Para Munn, "las relaciones entre eventos se desarrollan en la práctica de la vida cotidiana al inocular la experiencia de un evento dado con los pasados (o posibles pasados) y los futuros" (1990: 13). Se podría también argumentar que las relaciones regionales entre *espacios vividos* se desarrollan al conectar la experiencia en un lugar con la evocación de otros eventos y lugares.

La defensa que hace Rabinow de la antropología como nominalismo elabora la idea de "horizontes" de una manera que podría haber sido útil para el argumento de Munn. La tarea de la antropología, desde Kant a Foucault, y de este a Rabinow (1988: 356) ha sido elucidar el lenguaje de las relaciones sociales por medio del cual las personas crean el mundo como ellos lo conocen:

> Como estos mundos solo aparecen desde el horizonte del presente, cuyas fronteras ellos forman, funcionan como límites para quienes somos, lo que podemos saber, esperar, hacer. Estos mundos, junto con las estructuras de nuestra razón, constituyen los límites de nuestra experiencia. Por esa razón, la antropología entendida de manera pragmática ocupa ese lugar donde los humanos aprenden a reconocer

> su propia cultura como "l'école du monde" […] donde se unen la universalidad y la particularidad en una relación única (Rabinow, 1988: 356).

Pero ¿cómo llegamos a descentrar este enfoque para que la "escuela del mundo" no esté dominada por *nuestras* (occidentales) escuelas de pensamiento y *nuestros* mundos? ¿Cómo abordamos el problema de la multivocalidad y de las relaciones de poder diferenciales que son implícitas en tales construcciones culturales del lugar? Munn no transmite ninguna sensación de que existan opiniones dispuestas y contrapuestas en el ámbito de la construcción social del espacio regional y vivido. ¿Cómo se integraron las interpretaciones de los acontecimientos de Gawa para convertirse en la narrativa única que nos presenta? Dependiendo del posicionamiento del observador, los horizontes del mundo regional podrían ser bastante diferentes. Munn no aborda este problema fenomenológico de cómo construir una narrativa compartida desde las experiencias individuales únicas. Tampoco aborda las dudas que podrían plantearse acerca del futuro de la comparación y la generalización.[9]

El "verdadero horizonte definidor" de nuestros conceptos de otredad y diferencia, para Edward Said (1989: 217), es el hecho imperial. Sostiene que solo podemos comprender el mundo desde nuestra cultura si comprendemos el contexto imperial que lo moldeó y lo sigue moldeando. Así, una antropología enraizada en el lugar tendría que ser constituida histórica y geográficamente. En consecuencia, como las narrativas enraizadas de Berdoulay y los mundos regionales de Munn, las culturas pueden

> … ser representadas como zonas de control o de abandono, de recuerdo y de olvido, de fuerza o de dependencia, de la exclusividad o de compartir; todo esto ocurriendo dentro de la historia global que es nuestro elemento. El exilio, la inmigración y el acto de cruzar fronteras son experiencias que nos pueden proporcionar nuevas formas narrativas; o, en palabras de John Berger, *otros* modos de decir (Said, 1989: 225).

9 Marilyn Strathern (1988:1991) ha contribuido mucho a repensar la comparación a partir de su preocupación por la polifonía. Véase también Holy (1987), para una defensa del método comparativo.

¿Cómo se puede restaurar la agencia a las personas que estudiamos mientras que nos mantenemos conscientes de sus contextos imperiales, históricos (y contemporáneos)? La "etnografía multilocal" es el término adoptado por George Marcus para resolver este problema. "La idea es que cualquier actividad o identidad cultural está construida por agentes múltiples en contextos variados, o lugares, y que la etnografía tiene que ser concebida estratégicamente para representar esta multiplicidad y para especificar las consecuencias tanto deseadas como no deseadas en la red de conexiones dentro de un sistema de lugares" (Marcus, 1989: 25; Marcus y Fischer, 1986: 94). La meta es reconceptualizar la etnografía regional de tal manera que se eliminen las distinciones entre los niveles macro y micro. Marcus pretende conservar la preocupación etnográfica por el lugar, pero a la vez empujarla más allá. Busca "una etnografía que, si bien abarca las condiciones locales, tiene como objetivo representar un sistema o partes de un sistema" (Marcus y Fischer 1989, 25). Este discurso descentrado tiene la localidad etnográfica en su centro. Está constreñido por la noción de lugar como localidad de manera exclusiva. Probablemente Marcus no quiere sugerir que los sistemas locales están autocontenidos o son homogéneos. Pero no está muy claro cómo pretende aplicar la idea de "sistema" al análisis cultural contemporáneo.

Con respecto a "localidad", Giddens (1979: 206) ha desarrollado el concepto para vincular al individuo con lo que Marcus podría llamar "el sistema" a través de la agencia humana, pero Marcus no cita a Giddens, así que este puede no ser el uso que tiene en mente. Por localidad, Giddens quiere decir "los escenarios físicos de la actividad social situada geográficamente" (Giddens, 1990: 18; 1984). Según Giddens, el vaciamiento del tiempo inherente a la modernidad conduce a un "vaciamiento del espacio" concomitante o a la separación de espacio y lugar. Las actividades localizadas dominaban el moldeamiento del espacio en lugar en lo que Giddens llama las sociedades "tradicionales" o "premodernas". Pero en el mundo de hoy, las relaciones distanciadas predominan y proporcionan la base para nuevas zonas y fronteras espaciales y temporales:

> La llegada de la modernidad de manera creciente desgarra el espacio del

> lugar, fomentando relaciones entre otros "ausentes", distantes de cualquier situación dada de interacción cara a cara. En las condiciones de la modernidad, el lugar se vuelve cada vez más *fantasmagórico*: o sea, las localidades están completamente penetradas y moldeadas, en términos de influencia social, desde bastante lejos (Giddens, 1990: 18-19).

Como los geógrafos Entrikin y Berdoulay, los antropólogos Marcus y Munn, y otros investigadores (de manera notable Said), discutidos hasta ahora, Giddens delinea un marco analítico que disuelve las oposiciones macro-micro. La multilocalidad, como la multivocalidad, se vuelve un tema que explorar. Para Giddens, el lugar es "fantasmagórico" en tanto que lo experimentamos como una sucesión de imágenes en constante movimiento. El intervalo en el que la distancia entre espacio-tiempo prevalece es variable, irónicamente, a través del espacio y el tiempo. En lugares como Melanesia hoy en día, la identidad local definida por y expresada mediante el lugar sigue más fuerte que en una gran parte de Occidente. Pero el lugar, hasta cierto punto, sigue estando fragmentado y es multilocal en su construcción. Esto resulta evidente en procesos como la mercantilización de la tierra, su uso para cultivos comerciales dependientes de los mercados extranjeros, el uso de medios como la radio y los periódicos para hablar de la tierra y la identidad nacional, la construcción de una identidad urbana en términos del lugar donde ya no se vive, etcétera.

La fragmentación del lugar en Melanesia no resulta tan llamativa como los paisajes posmodernos, encarnados por Los Ángeles, que tanto fascinan a los geógrafos posmodernos. Edward Relph, conocido por su libro *Place and placelessness* (1976), considera estos paisajes en su trabajo más reciente. Los paisajes posmodernos confunden y yuxtaponen los tiempos y los lugares. Relph (1991: 104), pregunta: "¿Qué ocurre cuando la lógica imaginada de Disneyworld se convierte en la lógica del resto del mundo?". Relph llama los paisajes resultantes "heterotopías". El término se originó con Foucault (1970: 18), quien contrastó los lugares imaginados de las utopías, que reflejan o invierten directamente las sociedades "reales", con las heterotopías, que son "un tipo de utopía efectivamente establecida en la que los sitios reales, todos los otros sitios reales que se encuentran dentro

de una cultura, están a la vez representados, contestados e invertidos" (1986: 24). Los ejemplos que Foucault da de heterotopías incluyen panteones, museos, bibliotecas, burdeles, carnavales y jardines. Para Relph, las heterotopías no son tan ordenadas:

> La heterotopía es la geografía que lleva el sello de nuestro tiempo y pensamiento; o sea, es pluralista, caótica, diseñada en detalle, pero carente de una fundación universal de principios, continuamente cambiando, vinculada por flujos de información sin centro; es artificial y marcada por desigualdades sociales profundas (Relph, 1991: 104-105).

El primer principio de la "heterotopología" de Foucault (1980: 24) es que "probablemente no existe una cultura en el mundo que no constituya heterotopías", pero, de lejos, donde mayor impacto ha tenido esta noción ha sido en los estudios de geógrafos urbanos, posmodernos, de los paisajes occidentales. Como veremos, aquellos antropólogos que trabajan en otros lugares podrían utilizar el concepto de manera productiva.

Las heterotopías son sitios. La multilocalidad es una manera de experimentar aquellos y otros lugares. Partiendo de las propuestas de Giddens y Marcus, considero que la multilocalidad tiene varias dimensiones diferentes. Primero, asume un análisis descentrado, no como el análisis "objetivo" propuesto por Entrikin, sino en el sentido de comprender la construcción de los lugares desde múltiples puntos de vista, no occidentales, además de aquellos que son eurocéntricos. En este sentidom, la multilocalidad significa mirar a los lugares desde el punto de vista de los otros, reconociendo que en realidad no existen "otros" en un mundo donde todos podemos sufrir potencialmente de las acciones de un agente (por ejemplo, en el caso de un derrame de petróleo o un accidente nuclear). Como argumentan Gupta y Ferguson (1992: 16), los antropólogos deberían estar dispuestos a cuestionar "la idea dada" de un mundo dividido entre "nosotros" y "otros".

En segundo lugar, la multilocalidad puede referirse a los análisis comparativos o contingentes del lugar. Marcus propone prestar atención a esta dimensión. Algunas actividades (por ejemplo, los mercados, los

movimientos sociales) emergen de las acciones de múltiples agentes en diferentes lugares y solo pueden ser comprendidas al identificar "las consecuencias intencionales o no en la red o las conexiones complejas dentro de un sistema de lugares" (Marcus, 1989: 25).

En tercer lugar, la multilocalidad puede hacer referencia a las relaciones reflexivas con los lugares. Un antropólogo, un viajero o cualquier persona cuyo lugar ha sido transformado, por ejemplo, por un desastre natural o por un desarrollo suburbano —en otras palabras, cualquier persona desplazada de su lugar familiar o de la posibilidad de una identidad local—, sería muy consciente de los contrastes entre lo conocido y lo desconocido. En situaciones así, las personas con frecuencia perciben un paisaje nuevo en términos de otros más familiares. Esta es una manera multilocal de ordenar el significado. De modo alternativo, como ha observado Basso (1988), los paisajes extraños pueden desconcertar y silenciar observadores de la misma manera en que lo hace una lengua desconocida.

Por último, un paisaje físico puede ser multilocal en el sentido que moldea y expresa los significados polisémicos del lugar para diferentes usuarios. Para ser más preciso, esto se refiere más a la dimensión multivocal de un lugar, pero la multilocalidad transmite la idea que un lugar puede ser experimentado de maneras muy diferentes.

Todas estas dimensiones de la multilocalidad están afirmadas en las conexiones, en la presencia interactiva de lugares y voces diferentes en contextos geográficos, antropológicos (culturales) e históricos. Estoy de acuerdo con Fabian (1990: 771) en que nuestro objetivo debería ser "transformar la etnografía en una praxis capaz de hacer presente al otro (en lugar de producir representaciones basadas en la ausencia del otro)". Fabian propone llevar esto a cabo mediante la actuación y la escritura de la etnografía. Pero existen otros caminos. Para nuestros propósitos, planteo delinear las líneas u "horizontes" desde un punto de vista que empodere al lugar como un concepto crítico de la antropología. La aplicación de la teorización antropológica y geográfica reciente sobre el lugar en Melanesia ilustra cómo el lugar moldea recíprocamente a los individuos y la sociedad por medio de la agencia humana.

El primer paso es reconocer que el espacio es construido socialmente, y contestado en la práctica. La construcción sociocultural del espacio ha recibido considerable atención de parte de geógrafos urbanos marxistas (Castells, 1977; Gottdiener, 1985; Harvey, 1973; 1989). Para muchos investigadores el espacio urbano ha sido un interés primordial. En América del Norte y Europa, el desarrollo del capitalismo y el "estado local" han sido fundamentales en la estructuración del espacio (Logan y Molotch, 1987). La confrontación entre empresarios preocupados por los valores de intercambio y residentes preocupados por los valores de uso, como la calidad de vida, debe centrarse en "la compleja articulación entre universos simbólicos de significado, la acumulación de capital y el espacio", y son fundamentales para el análisis del desarrollo urbano (Gottdiener, 1985: 155).

En mi investigación con Matthew Cooper sobre cooperativas de vivienda en Toronto (Cooper y Rodman, 1990; 1992; Rodman y Cooper, 1989), hemos demostrado que, cuando se eliminan las consideraciones del valor de intercambio, como en las cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro, otros procesos sociales involucrados en la creación y manipulación de los valores de uso del espacio urbano se vuelven más visibles. Por valores de uso me refiero a dimensiones del espacio no comercializados, como disfrutar con tranquilidad o sentirse como en casa. Teóricamente, lo mismo puede resultar cierto de la construcción social del espacio en Melanesia. Allí el capitalismo tiene un impacto menor y los valores de uso siguen teniendo importancia central para la mayoría de los isleños rurales. Sin embargo, las consideraciones de valores de cambio entran al escenario por medio de la minería, la silvicultura, el turismo, e incluso los cultivos comerciales. Se han realizado pocas investigaciones sobre la construcción social del espacio por fuera de los centros urbanos del mundo capitalista. Al estudiar la construcción social del lugar en Melanesia, se enriquece nuestra comprensión de las personas, para quienes, tanto individual como colectivamente, los lugares siguen siendo integrales a su vida social.

El empoderamiento del lugar: ejemplos de la Melanesia contemporánea

Este tema ha sido tratado etnográficamente por Margaret Jolly, quien señala la inseparabilidad de lugar y la identidad de las personas de Vanuatu.[10] Tanto ella como yo hemos escrito acerca de la condensación poderosa de persona y lugar que se encuentra en el concepto de *man ples* (Jolly, 1990: 17; M. C. Rodman, 1987: 35-36). Como ella señala de manera muy acertada, "imágenes así no solo fueron cruciales para reclamar la tierra como inalienablemente vinculada a la gente de un lugar, pero a la vez proclamando a las personas como fuerzas en control del lugar" (Jolly, 1990: 17). Giddens (1990: 88) podría considerarlo como una forma de reincorporación, un intento de contrarrestar la brecha entre tiempo y espacio iniciada con el proceso colonial. En Vanuatu esto se logró menos por el contacto cara a cara que mediante un énfasis retórico en el arraigo de la gente en el lugar, o la autoctonía. Jolly señala el primordialismo, o evocación de un estado original en el que las personas y el lugar eran uno, que recorre las construcciones de lugar en Vanuatu. Esta expresión de conexión entre las personas y los lugares crea lo que Giddens (1990: 102) llama un "ambiente de confianza" en las relaciones de parentesco, comunidades locales, cosmología y tradición, basado a su vez en el lugar. La fuerte afirmación de la inalienabilidad de la tierra en Vanuatu, sin duda, responde a la alienación extensiva de tierras que ocurrió para formar plantaciones durante el periodo colonial, que solo llegó a su fin en 1980. También remite a la vida de la "prepacificación" (antes de 1930). Los líderes guerreros podrían apoderarse de las tierras de sus seguidores, además de las de sus enemigos, y conservarlas bajo su posesión durante el periodo de una vida o incluso por más tiempo. El vínculo entre lugar

10 Esta sección no pretende tratar la literatura sobre el lugar en Melanesia de manera exhaustiva. Si esa fuera mi intención, los "paisajes míticos" de Malinowski (1922) y las observaciones de Leenhardt (1979 [1947]) acerca del espacio, paisaje social y la condición de persona serían puntos clave en un repaso así. En su lugar, esta sección trata unos pocos ejemplos, la mayoría de Vanuatu, para aplicarles los puntos teóricos discutidos hasta ahora.
El lugar también ha aparecido de manera destacada en el trabajo del geógrafo francés Joel Bonnemaison (1986), en Vanuatu. Otros antropólogos quienes han escrito sobre lugar en Vanuatu incluyen Larcom (1982), Rubinstein (1978) y Tonkinson (1982).

y voz fue directo. Los seguidores que carecían del poder para levantar la voz también estaban desprovistos del poder para recuperar sus tierras.

Jolly contrasta el significado de lugar en Fiji y Vanuatu de hoy en día. La "costumbre" en Fiji está menos fusionada con conceptos de lugar —aunque se llama *vakavanua*, 'el camino de la tierra'—. Jolly sostiene que los británicos valoran la cultura tradicional de Fiji, e intentan mezclarse con la práctica administrativa colonial. Sin embargo, en Vanuatu, los británicos y los franceses siguieron una política, aunque caótica, de alienación de tierras donde el respeto por la cultura tradicional no tuvo un papel importante. Para la gente de Vanuatu, la independencia se llegó a asociar con la recuperación de sus tierras junto con su pasado cultural. Como lo expresa Jolly, "*kastom* fue explícitamente la reclamación de un lugar, en contra de la ocupación europea de la tierra, y la reclamación de un pasado que había sido perdido o abandonado" (1990: 17).

En la isla de Ambae, en el norte del archipiélago, el lugar ha sido crucial para la identidad. Círculos concéntricos de identidad se expresan a través del lugar. Esto se parece a lo que Fernandez ha llamado "envolturas de espacio doméstico", en un contexto africano (1982: 106-110). *Vanue* es una palabra para el lugar que implica el sitio de la vivienda, aldea, distrito, isla, e incluso el país mismo, Vanuatu. Es espacio vivido en cada una de las sucesiones de zonas regionales. En otro lugar he explorado las dimensiones del vínculo entre las personas y el lugar, junto con las maneras para manipular ese vínculo (M. C. Rodman, 1987). Más adelante en este artículo, incluiré un ejemplo de la multivocalidad en el que puede evidenciarse este vínculo —y desvínculo— en los funerales.

William Rodman también ha considerado la importancia de la construcción del lugar en su análisis de la autonomía legal en Ambae. Argumenta (1985; 1992) que las personas en Ambae sintieron más allá del horizonte colonial y poscolonial, o sea, más allá del alcance o interés del Gobierno. Formularon códigos de leyes para los lugares locales, que podrían hacer cumplir mientras la ofensa no fuera algo tan serio como el asesinato. Esto sugiere, como ha comentado Philibert (comunicación personal, 1991; Philibert, 1988), que, "para un grupo social encapsulado, ir hacia afuera

de las fronteras del grupo es un arma de doble filo a la cual no se debe recurrir muy a menudo, ya que con frecuencia significa una admisión de impotencia y una invitación a una intervención mayor por parte de forasteros. Cuanto más poroso sea el límite, mayor la necesidad para el secreto y la autosuficiencia". Las envolturas del espacio vivido en este caso aíslan las zonas regionales del poder. Ahora voy a hacer referencia a estas cuestiones de poder y lugar.

Poder

Como sugiere la cita de Foucault (1980: 70), al inicio del texto, ya es hora de dejar de devaluar el espacio y empezar "a delinear las formas de implantación, delimitación y demarcación de los objetos, los modos de tabulación, la organización de dominios (que significa) poner en relieve los procesos —históricos, por supuesto— de poder". Lamont Lindstrom aplica un modelo discursivo de conocimiento y poder al análisis de la sociedad tannese en el sur de Vanuatu. Esto es Foucault en la jungla, una buena ilustración de cómo las ideas de Foucault se materializan de manera incisiva en un contexto no europeo. Y añade una dimensión nueva a Foucault, porque en Tanna, desde el punto de vista de Lindstrom (1990: 22), el poder está localizado Considera que la "geografía", o el lugar, como una de las tres "disciplinas" en Tanna que organizan el conocimiento de las personas. (Las otras son la medicina y la magia). El poder es crucial para la distribución desigual de todo conocimiento disciplinario. La desigualdad implica que los hombres, en particular los mayores, son los mejor cualificados para "hablar seriamente" y ejercer el poder (Lindstrom, 1990: 59). El poder verbal tan evidente entre los hombres adultos, como lo reconoce Lindstrom, por lo regular se encuentra amordazado entre las mujeres y los jóvenes, quienes tienden a ser silenciados cuando ocurre el "habla seria" y se expresa el poder.

La explicación de Lindstrom de las complejidades del poder discursivo es sistemática e inteligente. Llega en un momento de la historia del pensamiento antropológico en que la sistematicidad requiere el tipo de rehabilitación conceptual que él nos ofrece. Con esto quiero decir que

Lindstrom reconoce la complejidad de los patrones sociales, pero a la vez nunca asume la cultura como una totalidad acabada o delimitada. Delinea los vínculos entre los sueños, los conflictos por tierras, beber kava y la represión de la disidencia en la política nacional. Demuestra de manera persuasiva cómo, en todos estos dominios, "el conocimiento llega a ser ordinario o ridículo, verdad o mentira" (Lindstrom, 1990: 173). Su marco analítico funcionaría asimismo bien tanto para Ambae, donde yo he realizado trabajo de campo, como para Tanna. Provee un marco para el análisis regional de la práctica discursiva. Pero para comprender el poder no discursivo, se necesita ir más allá y tomar más en serio el lugar de lo que lo hace Lindstrom.

El conocimiento práctico, más que discursivo, organiza una gran parte de la vida social en Vanuatu. Lindstrom reconoce esto, aun cuando pone de lado una consideración seria de ello para enfocarse en su tema central. El conocimiento no discursivo resulta más difícil de alcanzar para los antropólogos, aunque se expresa frente a nuestros ojos. Lindstrom reconoce que las "bases significativas del poder quedan fuera de la conversación *per se*: las estructuras físicas de las casas del pueblo y la selva claramente organizan la conversación en la isla" (Lindstrom, 1990: 175). Sin embargo, privilegia lo verbal, lo cual en Vanuatu quiere decir privilegiar a los poderosos, aquellos que "saben cómo" (y tienen permitido) hablar.

Multivocalidad

Para poder escuchar las voces de aquellos que están silenciados en las conversaciones en la isla, se requiere escuchar con todos los sentidos. Con frecuencia, la multivocalidad involucra la multilocalidad. Los lugares polisémicos resumen las prácticas de las personas, su historia, sus conflictos y sus logros. Las narrativas sobre los lugares no solo se enuncian con palabras; pueden expresarse con otros sentidos más allá de hablar y escuchar.[11] Tales narrativas pueden expresarse mediante la imagen de una roca que creció, ciertos olores, cómo sopla el viento o el sabor de un

11 Para un ejemplo reciente de una antropología que reconoce la importancia de los sentidos aparte de lo auditivo y verbal, véase Howes (1991).

mango. La casa donde viví con mi familia en Vanuatu tenía enfrente una roca grande que había sido traída al pueblo como una pequeña piedra. El mismo nombre del pueblo hacía referencia a un cambio en el viento que rozó la mejilla de un héroe cultural que estaba de paso. En su viaje, como cualquier explorador, había nombrado los lugares que "descubrió", y al descubrir, creó. Transformó el paisaje físico en un paisaje multilocal y social.

En *Masters of tradition* (1987) discutí el arraigo de la identidad en el lugar, evidente tanto en el recorrido de un niño como en el de un anciano por los alrededores del pueblo en que vivíamos. El enraizamiento de la identidad es similar a los procesos que Salmond describe para los maorí, para quienes "el conocimiento específico está ligado a puntos de referencia concretos" (Salmond, 1982: 84).[12] Los puntos de referencia narrativos del anciano influyente incluían palmeras negras que una vez habían sido usadas como estacas donde se ataban cerdos con colmillos cuando asumió por primera vez su rango en la sociedad. Señaló las empalizadas que rodeaban su pueblo natal, ahora abandonadas, convirtiéndose en árboles que habían echado raíces y que ahora se elevaban sobre el suelo del bosque. La guerra y la matanza de cerdos estaban relacionados recíprocamente; la matanza de cerdos señalaba y exigía la paz. Tanto las ceremonias para asignar rango como las emboscadas eran fenómenos multilocales. El que tomaba un rango no podría matar en primer lugar sus propios cerdos, sino que dependía de los regalos de otros; con frecuencia, de las personas de pueblos lejanos e incluso de otras islas. La guerra también representaba un patrón multilocal de alianzas cambiantes.

Los paisajes del niño de diez años que describo en mi libro identificaron lugares con nombres y propietarios. En parte, creo que esto reflejaba la importancia que se le concedía a la comida en el paisaje de un niño. Por ejemplo, un niño necesitaba conocer quién era el dueño de cada árbol de mango para saber si podía comer libremente la fruta. A diferencia de las niñas, que quedaron más cerca del hogar, los niños en Ambae corrían

12 Salmond (1982) compara el enraizamiento maorí de conocimiento y lugar con los "paisajes teóricos" donde el conocimiento es representado metafóricamente como si fuera un territorio.

libres por las plantaciones, jardines y el bosque. Con excepción de aquellos que habían tenido la oportunidad de viajar en avión o barco, el sentido de lugar de un niño era el de un territorio continuo con centros, caminos y límites definidos con claridad. El lugar, aunque zonificado por regiones, no estaba fragmentado en localidades, como en nuestras propias vidas. Pero sí era multilocal en tanto que había muchos lugares conectados y nombrados dentro de aquel territorio, lugares que unían a vivos y muertos con el niño mediante puntos de referencia.

Los lugares emblemáticos de las mujeres también hablan. Mientras yo mapeaba el pueblo, una abuela me habló acerca de los lugares donde nacieron sus hijos. Una casa de nacimiento había sido por aquí; en otra ocasión había dado a luz en una choza de menstruación por allí, al darse cuenta de que no iba a llegar a tiempo al hospital, ubicado a ocho millas de distancia. Aunque puse una X en mi mapa en las ubicaciones que me señalaba, no parecían corresponder con nada de lo que pude observar en el paisaje. Sin embargo, para esta mujer mayor dichos recuerdos se hallaban grabados en el paisaje tan claramente como si se tratara de placas conmemorativas. Otros recuerdos contaban con puntos de referencia visibles con significados especiales para ella. Cada vez que cosechaba nueces o mandarinas de árboles que había plantado, pensaba en sus hijas. Uno de los mandarinos daba sombra al suelo alisado donde una vez existió la primera casa que compartía con su marido.

En los relatos sobre el lugar de la mujer, el niño y el hombre que he descrito, predominan los valores de uso. El valor de cambio de la tierra que tiene tanto significado para ellos es de poca importancia, excepto por aquella porción de la tierra del anciano plantada con cocos. En todo caso, el niño y la mujer no tienen ningún derecho de propiedad, solo derechos de uso. Estos derechos de uso, sin embargo, otorgan una pequeña cantidad de poder.

Las personas sin poder alguno tampoco tienen lugar. Aquí, como en otras partes, se cruzan los mundos discursivos y prácticos. Una viuda de la isla de Santos permaneció en Ambae durante ocho años después de la muerte de su marido. Vivió en una casa en tierras asignadas a la Iglesia anglicana. Tenía permiso para usar un jardín que pertenecía a los parientes

de su marido, pero ella sintió que su vida dependía demasiado de otros. Como Lindstrom podría haber pronosticado (1990), expresó su inseguridad por carecer de un lugar realmente propio y manifestó cuánto miedo le daba hablar: "Si no tuviese cuidado, la gente hablaría de mí. Dirían: '¿Dónde está su lugar?'" (M. C. Rodman, 1987: 40). En mi última visita a Ambae, ella había muerto ya, y su casa de bambú había desaparecido. El solar de la casa había vuelto a ser de uso comunitario. Ahora era la cancha de voleibol del pueblo.

Las casas móviles, incluidas las que desaparecen —como la de la viuda—, trazan pautas sociales multilocales en Vanuatu (M. C. Rodman, 1985b). Superposiciones de mapas del pueblo que dibujé durante varias estancias de trabajo de campo revelaron gran movilidad individual en un lugar donde el número total de residentes se mantenía constante. Las casas, al igual que las personas, se hallaban en movimiento. Un análisis detallado de este fenómeno basado en el lugar reveló mucho acerca de los patrones de parentesco y residencia. En otro estudio (M. C. Rodman, 1985a), me pregunté por qué el diseño de las casas de hombres se mantuvo igual mientras que las formas de las casas de las mujeres cambiaron considerablemente por la influencia de las misiones.

Paisajes sociales

El centrarse en el lugar, como en las etnografías multilocales de Marcus, puede eliminar la distinción entre lo micro y lo macro, ya que la región y el pueblo son puntos sobre una escala móvil. Los dos son "paisajes sociales", aunque vistos con diferentes grados de detalle. El concepto de espacio vivido es fenomenológico, donde se subraya la experiencia del individuo en el mundo. Pero un "paisaje social" implica una mirada más amplia de tiempo y espacio. El concepto no es nuevo en la etnografía de Melanesia (Leenhardt, 1979 [1947]). En el trabajo del arqueólogo del Pacífico, Chris Gosden (1989), se vincula el registro arqueológico con las formas con las que los grupos sociales interactúan con paisajes en parte estructurados ya por grupos sociales previos. El paisaje social es a la vez contexto y contenido, representado y material. Es el mundo vivido en forma física.

Puede ser radicalmente único —el paisaje social que los pueblos indígenas (de forma colectiva o individual) definen mediante experiencias o intereses particulares—, o puede ser un mapa del analista, el cual marca las "diferencias que hacen una diferencia", en el sentido de Bateson (1972: 453), que plasma la clasificación del arqueólogo o la comprensión de las categorías de las personas locales.

Miriam Kahn (1990) proporciona ejemplos recientes del "anclaje espacial del mito" en lo que podrían ser vistos como paisajes sociales en Papúa Nueva Guinea.[13] Observa cómo los lugares en el paisaje, en particular las rocas, se vinculan con las historias míticas, que con frecuencia versan sobre héroes culturales o antepasados viajeros. "Las ideas en Melanesia acerca del paso del tiempo están concebidas en un marco espacial" (Kahn, 1990: 61). En consecuencia, argumenta, los antropólogos deben cuidarse de no dar demasiado peso a la comunicación verbal (discursiva); deben ser más conscientes de las maneras como "los mitos son registrados y recordados por otros dispositivos, es decir, las formas físicas en el paisaje. Las piedras, aunque no son los únicos marcadores físicos, proporcionan interesantes y pertinentes ejemplos del apego melanesio al lugar y el registro del mito y de la historia en términos del espacio" (1990: 53).

Por medio de una mayor consciencia de la construcción social del significado en el paisaje, podemos empezar a comprender la experiencia de lugares que viven de maneras diferentes a las nuestras. Los lugares en Vanuatu, por ejemplo, incluyen rocas que crecen, personas convertidas en piedras, espíritus, ancestros, y recuerdos apilados sobre recuerdos que apenas dejan una marca visible en el paisaje que demuestre que alguien vivió allí. Hasta las islas se mueven. Dos islas en cada extremo de la playa en Port Olry, en la isla de Santo, donde yo estudiaba el desarrollo pesquero (M. C. Rodman, 1989), se había trasladado a su ubicación actual desde otro lugar. Otra isla, Araki, también había estado allí, pero un día se había movido a una ubicación nueva unos cincuenta kilómetros más al sur. La isla móvil se llevó consigo a las esposas y maridos de algunas

13 Los mitos de enraizamiento son comunes en Melanesia. Para otro ejemplo reciente del poder persistente de tales mitos, véase la discusión de Gewertz y Errington (1991: 33-38) de la carta mítica para la construcción de la casa de hombres chambri como, literalmente, una atracción "turística".

personas, algo que provocó el enojo de aquellos que fueron abandonados. Esta narrativa multilocal explica por qué los sistemas de parentesco de Araki y Port Olry son tan similares.

Kahn (1990: 59) afirma que "cada pueblo utiliza el paisaje local para hacer suyo el mito". Cada pueblo, en este sentido, crea su propio paisaje social, igual que cada persona. Pero cada comunidad, o cada individuo, es también parte de una cadena de vinculación a lugares. El "copyright geográfico" (Lindstrom, 1990: 78) es la autoridad para hablar en público acerca de los nombres y lugares. Parece que se aplica igualmente bien en la situación de Papúa Nueva Guinea, de la cual escribe Kahn, como en el caso de Tanna. Los hombres pueden silenciar a los menos entendidos o a quienes pueden ser pensados como fuera de lugar al hablar de lo que no es suyo. Así que cuando Kahn comenta cómo los melanesios se refutaban unos a otros una versión de un mito o descubrían conexiones de parentesco a partir de haberle narrado detalles idénticos de un mito, está hablando de forma implícita de este tipo de "copyright". Cada narrador y cada piedra míticamente impregnada es parte de un paisaje social cuyos horizontes se solapan con otros paisajes sociales. Los individuos tienen un vínculo más fuerte con lugares concretos y pueden hablar de ellos (y de su pasado) con mayor autoridad. Pero la historia y su paisaje los ata a otros expertos y otros lugares.

Conclusión

Los temas de poder, multivocalidad, multilocalidad, narratividad y paisaje social se entremezclan en un ejemplo final. Las cualidades dinámicas y socialmente construidas del lugar en Ambae son evidentes en los límites expresados en las fiestas funerarias. Estos banquetes son heterotopías en el sentido de Foucault (1986). Marcan y contestan las fronteras entre los vivos y los muertos, entre lugares y entre los intereses en conflicto de diferentes personas.

Cuando una persona muere, no se aleja mucho del mundo de los vivos durante unos cien días. El espíritu del difunto flota cerca de las copas de

los árboles frutales o los cocoteros, observando y esperando mientras sus parientes intercambian regalos. El difunto sigue fuertemente vinculado con su lugar. Los intercambios de dones y los banquetes ocurren después de cada muerte, pero la escala de la actividad es variable. Las ceremonias más grandes y competitivas siguen la muerte de un gran propietario de tierra. Los propietarios son casi siempre hombres.

La multilocalidad entra en juego para comprender los funerales a varios niveles. En primer lugar, es importante darse cuenta de que lo que está en juego ha cambiado durante el último medio siglo, ya que la tierra de plantación se ha mercantilizado. En otro lugar (M. C. Rodman, 1987), he descrito la "cadena de la copra" multilocal que unía las playas de las Nuevas Hébridas coloniales con los molinos procesadores de aceite de Marsella. En segundo lugar, el valor de uso de la tierra para la horticultura de subsistencia y para construir casas compitió con el valor de cambio de la misma tierra para cultivar cocos que podían ser secados y vendidos como copra. Si una persona tenía acceso a múltiples locales, podía ganar más dinero de la copra mientras aún mantenía un jardín. Por último, las ceremonias funerarias dislocan a los individuos muertos de los lugares que habían sido integrales para sus identidades como personas y, al establecer nuevas formas de propiedad, moldean nuevas identidades. En este sentido, la multilocalidad es la meta de los intercambios y banquetes.

Cuando muere un terrateniente, los banquetes funerarios llevados a cabo cada cinco días son arenas competitivas donde cada regalo puede ayudar a reclamar la tierra del difunto. El conocimiento sobre la historia del vínculo entre la tierra y las personas, vivas y muertas, se muestra en juegos competitivos de poder verbal entre los hombres y afirmaciones de lo que Lindstrom llama "copyright geográfico". El paisaje social fluctúa durante la transición entre el control por parte de una persona de una parcela grande de tierra y el nuevo orden que sigue al banquete que marca los cien días después de una muerte. La multivocalidad es evidente en el flujo de regalos competitivos mientras algunos parientes usan una retórica de "ayudar" para minar las mutuas demandas o dar regalos enormes para provocar vergüenza en aquellos que no pueden corresponder. También se observa en los silencios, entre las mujeres y los hombres menos poderosos,

quienes dirían que "no pueden hablar" para oponerse a un hombre influyente que intenta apoderarse de las tierras de un pariente, mediante el uso de regalos funerarios.

Al finalizar los cien días, los miembros del matrilinaje del difunto dan un último regalo que desvincula al difunto de su lugar. Con este regalo, la persona muerta abandona las copas de los árboles y se marcha del mundo de los vivos. (En el pasado el espíritu se habría echado de un acantilado hacia el mar y terminado en el lago del cráter en la parte de arriba de la isla. Ahora, muchos piensan, el espíritu se va al cielo). En el momento que ocurre esta separación de la identidad de la persona de su lugar, se afirma un nuevo paisaje social, porque estos regalos garantizan que la fertilidad regresará a los árboles del difunto. La muerte se convierte en vida en un lugar vivo mientras la vida sigue, dejando atrás los árboles, hacia el lugar de la muerte.

En este artículo he sugerido que se debe tomar el lugar más en serio. Aunque el problema de la voz ha recibido considerable atención, los problemas relacionados con el lugar con frecuencia se han reducido a cuestiones de ubicación. Debemos reconocer y esforzarnos para comprender la realidad compleja de los lugares donde hacemos trabajo de campo. Pero al destacar conceptualmente el lugar, este no debe ser exotizado o tergiversado como la esencia o totalidad de otras culturas. El lugar no debe convertirse, por ejemplo, en una metonimia de Melanesia. La construcción dinámica y cuestionada de los lugares representa el arraigo temporal de las ideas. Con frecuencia estas son narrativas solapadas de lugar, como vimos con los ejemplos del hombre, la mujer y el niño. Pueden ser narrativas contrapuestas, como en el ejemplo de los banquetes funerarios. Necesitamos considerar cómo diferentes actores construyen, disputan y arraigan la experiencia en el lugar.

Más que estar "encarcelada" (Appadurai, 1988b) en lugares etnográficos definidos por los antropólogos, las personas que estudiamos construyen sus propios lugares. Estos lugares no son simplemente ubicaciones para la acción social, ni tampoco meros reflejos de la sociedad. He intentado mostrar que los lugares en Melanesia pueden ser una expresión tan rica

y polifónica como sus voces. Al unir la multilocalidad con la multivocalidad, podemos mirar "a través" de estos lugares, explorar sus vínculos con otros, reflexionar por qué están construidos de una manera particular, ver cómo los lugares representan a las personas y empezar a comprender cómo las personas encarnan los lugares.

Reconocimientos

Segmentos de una versión anterior de este trabajo se presentaron en un taller llamado "No en aislamiento: Estudios regionales en la antropología de Melanesia", organizado por John Terrell y Rob Welsch. El taller, llevado a cabo del 3 al 5 de abril de 1991 en el Field Museum of Natural History, recibió patrocinio del museo y la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Estoy agradecida con las instituciones patrocinadoras, y también con el Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, que patrocinó mi investigación en Vanuatu en 1978, 1982 y 1985. El material etnográfico sobre los funerales formó parte de una ponencia que impartí en la reunión anual del American Anthropological Association, en una sesión organizada por Setha Low, por invitación de la American Ethnological Society. Estoy especialmente agradecida con ella y con William Rodman por sus detalladas sugerencias y apoyo sostenido. También aprecio los útiles comentarios hechos por dictaminadores anónimos, y por Matthew Cooper, James Fernandez, Michael Lambek y Edward Relph, y por los participantes en el taller Wenner-Gren.

Referencias

Agnew, J. A. y J. S. Duncan (eds). 1989a. *The power of place*. Unwin Hyman.

Agnew, J. A. y J. S. Duncan. 1989b. Introducción. En J. A. Agnew y J. S. Duncan (eds.).*The power of place* (1-8). Unwin Hyman.

Appadurai, A. 1988a. Introduction: place and voice in anthropological theory. *Cultural Anthropology*, *3*,16-20

Appadurai, A. 1988b. Putting hierarchy in its place. *Cultural Anthropology*, *3*, 36-49.

Basso, K. 1988. "Speaking with names": language and landscape among the Western Apache. *Cultural Anthropology*, *3*, 99-130.

Bateson, G. 1972. *Steps to an ecology of mind*. Ballantine.

Berdoulay, V. 1989. Place, meaning, and discourse in French language geography. En J. A. Agnew y J. S. Duncan (eds.). *The power of place* (124-139). Unwin Hyman.

Bonnemaison, J. 1986. *La derniere ile*. Arlea-ORSTOM.

Brookfield, H. C. y D. Hart. 1971. *Melanesia: a geographical interpretation of an island world*. Methuen.

Buttimer, A. 1971. *Society and milieu in the French geographic tradition*. R. McNally, Ed. Association of American Geographers.

Buttimer, A. y D. Seamon. 1980. *The human experience of space and place*. Croom Helm.

Castells, M. 1977. *The urban question*. Edward Arnold.

Claval, P. 1984. The concept of social space and the nature of social geography. *New Zealand Geographer*, *40*, 105-109.

Cooper, M. y M. Rodman. 1990. Conflict over use values in a Toronto housing cooperative. *City and Society*, *4*(1), 44–57.

Cooper, M. y M. Rodman. 1992. *New neighbours: a case study of cooperative housing in Toronto*. University of Toronto Press.

Cultural Anthropology. 1988. Theme issue: place and voice. *Anthropological Theory*, *3*(1), 1–49.

Entrikin, J. N. 1989. Place, region and modernity. En J. A. Agnew y J. S. Duncan (eds.). *The power of place* (30-43). Unwin Hyman.

Entrikin, J. N. 1991. *The betweenness of place: toward a geography of modernity*. Johns Hopkins University Press.

Fabian, J. 1990. Presence and representation: the other in anthropological writing. *Critical Inquiry*, *16*, 753-772.

Fardon, R. 1990. General introduction. En W. R. Fardon (coord.). *Localizing strategies: regional traditions of ethnographic* (1-35). Smithsonian Institution Press.

Ferguson, J. y A. Gupta. 1992. Theme issue: space, identity, and the politics of difference. *Cultural Anthropology*, *7*, 1.

Fernandez, J. W. 1982. *Bwiti*. Princeton University Press.

Fernandez, J. W. 1988. Andalusia on our minds. *Cultural Anthropology*, *3*, 21-35.

Foucault, M. 1970. *The order of things.* Random House.

Foucault, M. 1980. *Power knowledge*. Harvester.

Foucault, M. 1986. Of other spaces. *Diacritics*, *16*(1), 22-27.

Geertz, C. 1973. *The interpretation of cultures*. Basic Books.

Gewertz, D. y F. Errington. 1991. *Twisted histories: representing the Chambri in a world system*. Cambridge University Press

Giddens, A. 1979. *Central problems in social theory: action, structure and contradictions in social analysis*. University of California Press.

Giddens, A. 1984. *The constitution of society*. University of California Press.

Giddens, A. 1990. *The consequences of modernity*. Stanford University Press.

Gosden, C. 1989. Prehistoric social landscapes of the Arawe Islands, West New Britain province, Papua New Guinea. *Archaeology in Oceania*, *24*, 45-58.

Gottdiener, M. 1985. *The social production of urban space*. University of Texas Press.

Gupta, A. y J. Ferguson. 1992. Beyond 'culture': space, identity, and the politics of difference. *Cultural Anthropology*, *7*(1), 6–23.

Harris, C. 1991. Power, modernity and historical geography. *Annals of the Association of American Geographers*, *81*(4), 671-683.

Harvey, D. 1973. *Social justice and the city*. Edward Arnold.

Harvey, D. 1989. *The urban experience*. Johns Hopkins University Press.

Holy, L. (ed.). 1987. *Comparative anthropology*. Basil Blackwell.

Howes, D. (ed.). 1991. *The varieties of sensory experience*. University of Toronto Press.

Jolly, M. 1990. *Custom and the way of the land: the politics of tradition in Vanuatu and Fiji* [ponencia en la reunión annual de la Association for Social Anthropology in Oceania, Kauai, Hawaii].

Kahn, M. 1990. Stone-faced ancestors: the spatial anchoring of myth in Wamira, Papua New Guinea. *Ethnology*, *29*, 51-66.

Larcom, J. 1982. The invention of convention. *Mankind*, *13*(4), 330-337.

Lawrence, D. y S. Low. 1990. The built environment and spatial form. *Annual Reviews in Anthropology*, *19*, 453-505.

Leenhardt, M. 1979. *Do Kamo: person and myth in the Melanesian world*. B. M. Gulati, Trad. University of Chicago Press. [Original de 1947].

Ley, D. y M. Samuels (eds.). 1978. *Humanistic geography*. Maaroufa Press.

Lindstrom, L. 1990. *Knowledge and power in a South Pacific society*. Smithsonian Institution Press.

Logan, J. y H. Molotch. 1987. *Urban fortunes: the political economy of place*. University of California Press.

Malinowski, B. 1922. *Argonauts of the Western Pacific*. Routledge and Kegan Paul.

Marcus, G. 1989. Imagining the whole: ethnography's contemporary efforts to situate itself". *Critique of Anthropology*, *9*(3), 7-30.

Marcus, G. y M. Fischer. 1986. *Anthropology as cultural critique*. University of Chicago Press.

Munn, N. 1990. Constructing regional worlds in experience: Kula exchange, witchcraft and Gawan local events. *Man (N.S.)*, *25*, 1-17.

Nir, D. 1990. Region as a socio-environmental system: an introduction to a systemic regional geography. *GeoJournal Library Series*, vol. 16. Wolf Tietze, Ed. Kluwer Academic Publishers

Philibert, J.-M. 1988. Women's work: a case study of proletarianization of peri-urban villagers in Vanuatu. *Oceania*, *58*(3), 161- 175.

Rabinow, P. 1988. Beyond ethnography: anthropology as nominalism. *Cultural Anthropology*, *3*, 255-364.

Relph, E. 1976. *Place and placelessness*. Pion.

Relph, E. 1991. Post-modern geography. *Canadian Geographer*, *35*(1), 98-105.

Rodman, Margaret C. 1985a. Contemporary custom: redefining domestic space in Longana, Vanuatu. *Ethnology*, *24*(4), 269-279.

Rodman, Margaret C. 1985b. Moving houses: residential mobility and the mobility of residences in Longana, Vanuatu. *American Anthropologist*, *87*, 56-72.

Rodman, M. C. 1987. *Masters of tradition: consequences of customary land tenure in Longana, Vanuatu*. University of British Columbia Press.

Rodman, M. C. 1989. *Deep water: development and change in Pacific village fisheries*. Westview Press

Rodman, M. y M. Cooper. 1989. The sociocultural production of urban space: building a fully accessible Toronto housing cooperative. *City and Society*, *3*, 9-22.

Rodman, W. L. 1985. A law unto themselves: legal innovation in Ambae, Vanuatu. *American Ethnologist*, *4*, 603-622.

Rodman, W. L. 1992. The state of the law and the law of the state in Vanuatu. En V. Lockwood, T. Harding y B. Wallace (coords.). *Contemporary Pacific societies: studies in development and change* (55-66). Prentice Hall.

Rosaldo, R. 1988. Ideology, place and people without culture. *Cultural Anthropology*, *3*, 77-87.

Rubinstein, R. 1978. *Placing the Selfon Malo: an account of the culture of Malo Island, New Hebrides* [tesis de doctorado, Department of Anthropology, Bryn Mawr].

Said, E. W. 1989. Representing the colonized: anthropology's interlocutors. *Critical Inquiry*, *15*, 205-225.

Salmond, A. 1982. Theoretical landscapes: on a cross-cultural conception of knowledge. En D. Parkin (coord.). *Semantic anthropology* (.65-87). Academic Press.

Smith, C. A. 1976. *Regional analysis*. Academic Press.

Soja, E. 1989. *Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory*. Verso Press.

Strathern, A. 1990. Review of the evolution of Papua New Guinea societies. *American Ethnologist*, *17*, 376-383.

Strathern, M. 1988. Commentary: Concrete typographies. *Cultural Anthropology*, *3*, 88-96.

Strathern, M. 1991. *Partial connections*. ASAO Special Publications, núm. 3. Deborah Gewertz, Ed. University Press of America.

Tonkinson, R. 1982. National identity and the problem of Kinston in Vanuatu. *Mankind*, *13*(4), 306-315.

Tuan, Y.-F. 1991. Language and the making of place: a narrative-descriptive approach. *Annals of the Association of American Geographers*, *81*(4), 684-696.

Werbner, R. P. 1977. *Regional cults.* Academic Press.

Williams, R. 1977. *Marxism and literature*. Oxford University Press.

19. Un río nos atraviesa*[1]

Brett Williams

Resumen: El río Anacostia atraviesa Washington, D.C. Los desechos militares, la escorrentía urbana y las antiguas tierras agrícolas contaminan el agua, pero las personas que viven en sus orillas aprecian el río y luchan por limpiarlo. La ecología política, haciendo hincapié en las relaciones de poder, las inequidades, las conexiones y las contradicciones que unen los procesos naturales y sociales a lo largo del tiempo, amplía la teoría de la historia y la antropología en Washington. En este artículo exploro las experiencias y perspectivas de la gente que ha vivido a lo largo del río Anacostia durante los últimos 10 000 años. Las transformaciones vinculadas en los procesos ambientales y sociales crearon una y otra vez relaciones inestables, contradictorias e injustas entre la población y el ambiente natural y construido. La contaminación del río Anacostia refleja el colonialismo y la conquista: nacionalismo, militarismo, imperio; racismo, inequidad y reforma urbana. Comienzo con la conquista británica, luego paso a cuatro momentos sucesivos en la formación del Estado: la fundación del capital, la invención de un gobierno central fuerte, la renovación urbana en el núcleo del capital y el desarrollo contemporáneo del espacio fluvial. Los valores de uso de las personas que viven a lo largo del río se conflictúan con los valores de cambio que han dominado la historia de la ciudad. El movimiento de justicia ambiental de la ciudad ha emergido desde estos valores de uso y hoy en día enfrenta un plan de reurbanización masiva que explota y debilita el movimiento.

Palabras clave: ecología política, justicia ambiental, historia urbana, raza, pobreza.

1 Publicado originalmente en Brett Williams, 2001, "A river runs through us", *American Anthropologist*, 103(2), 409-431.

*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

El río Anacostia se desplaza desde su confluencia con el río Potomac hasta su desembocadura en Bladensburg, Maryland, que en el pasado había sido un puerto importante. El Anacostia no fluye, sino sube y baja débilmente con las mareas de la bahía de Chesapeake. Las botellas de plástico cubren sus orillas, junto con instituciones devaluadas como la cárcel de D.C., el Hospital General de D.C., una estación de transferencia de basura, una planta eléctrica y las casas de los pobres. Llantas viejas se mecen por el río y se enredan en su lodo. Los pescadores persistentes complementan sus compras con perca, arenques y bagres afectados por la contaminación del río. Pero "eso no es el Anacostia", sostiene Robert Boone[2], fundador de la Sociedad de la Cuenca de Anacostia y energético defensor de su restauración. Carl Cole, residente de cuarta generación del barrio Fairlawn en la orilla oriental, me cuenta:

> Cuando estoy sobre el agua estoy directamente donde quiero estar. He amado el agua desde que tengo memoria. Por la mañana, cuando paseo por el parque, sé que con este río tengo en mis manos aquellos por lo que otros pagarían millones para vivir junto a él. El agua es una cosa que sana, siempre lo ha sido, se queda contigo toda la vida, es tranquilizante.

Este trabajo explora la manera en que el río Anacostia ha dejado atrás a las poblaciones fluctuantes que han vivido en sus orillas. Las transformaciones vinculadas con procesos ambientales y sociales han creado relaciones inestables, contradictorias e injustas entre la población y el ambiente natural y construido. De estas contradicciones han surgido nuevas transformaciones, mientras la acumulación de capital, la formación del Estado y la construcción de guetos han moldeado la cuenca. Para comprender la contaminación y el valor del río Anacostia, se requiere explorar los procesos naturales y sociales conectados dialécticamente, porque las contradicciones siempre están allí, y el cambio siempre ocurre.

El argumento se basa en el pensamiento marxista, el movimiento de justicia ambiental, la historia social urbana y la nueva literatura en ecología política. La ecología política incluye investigadores que ponen el énfasis en el discurso ambiental, aquellos que hacen hincapié en los procesos

2 N de T. Se advierte al lector que para esa cita en específico no consta en la lista de referencias.

históricos y materiales, y otros que construyen un registro documental (Brosius, 1999a). La perspectiva discursiva y posmoderna pondera la construcción social de los problemas ambientales y el poder del lenguaje para producir naturaleza y el conflicto entre intereses (Bennett, 1999; Biersack, 1999; Brosius, 1999b; Milton, 1995[3]; Peet y Watts, 1996; Pena, 1998). La perspectiva más marxista examina las relaciones de producción y el desarrollo global del capitalismo, el acceso a los recursos productivos, el rol del Estado en la aplicación de políticas que favorecen a ciertas clases sociales por encima de otras, las ideologías que orientan el uso de los recursos y legitiman los beneficios desiguales, y las ramificaciones políticas del cambio ambiental (Atkinson, 1991; Bryant, 1992; Cronon, 1991; Davis, 1998; Dickens, 1996; Greenberg y Park, 1994; Harvey, 1996; 1998; Lipietz, 1995; Painter y Durham, 1995; Sheridan, 1995; Vasquez-Leon, 1999). Por ejemplo, Sheridan (1995) examina la ecología cambiante del desierto de Arizona relacionando el agua, el clima, las prácticas agrícolas y la política local con el mercado mundial de mercancías, que incide y reacciona a los procesos naturales y sociales en Arizona. Sheridan desafía a los estudiosos de la economía política al tomar a la naturaleza como actor en las luchas políticas.

El tercer enfoque de la ecología política señala con urgencia la necesidad de documentar estudios de caso de injusticia y abuso ambiental (African American Environmentalists Association/Friends of the Earth, 1998; Barker, 2000; Bryant y Mohai, 1992; Bullard, 1990; 1994; Fentiman, 1996; Grinde y Johansen, 1995; Johnston, 1994; 1997; Koester, 1987; Kothari y Parajuli, 1993; Steinberg y Clark, 1999). Esta investigación emerge con frecuencia del activismo de la justicia ambiental, que une los temas de derechos civiles con los ambientales. La justicia ambiental agrega al ambientalismo dominante una profunda preocupación sobre quién paga el precio del desarrollo que otros disfrutan.

Los activistas de justicia ambiental se enfocan en las relaciones de poder entre pueblos que de forma tradicional han controlado la tierra y

3 N. de T. Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas. En dicha lista únicamente figuran obras del mismo autor con otras fechas de publicación.

los recursos, y los Estados que se los quitan, los desarrollan o envenenan. Exponen los pactos con el diablo, negociados por los Estados y las corporaciones multinacionales, para extraer teca, instalar oleoductos y destruir humedales en Birmania; perforar la selva tropical de Ecuador en busca de petróleo o en las tierras agrícolas del pueblo ogoni en Nigeria; extraer cobre, cuyos residuos contaminan el río Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea; inundar los arrozales que alguna vez fueron fértiles con agua salada para cultivar camarones en Bangladesh; o destruir los manglares que estabilizan los hábitats costeros de organismos bentónicos en Honduras.

Critican a las agencias de préstamos internacionales que impulsan proyectos grandes, de alto perfil orientados a la exportación, como los cultivos comerciales o las presas hidroeléctricas que suelen ignorar las consecuencias ambientales a largo plazo (Fentiman, 1996; Johnston, 1994; 1997). En Estados Unidos, los activistas han luchado contra fábricas de plásticos y empresas químicas en el "callejón del cáncer" en Luisiana, la fundidora de plomo en West Dallas, fábricas de trementina en Arkansas, los códigos postales tóxicos de California y muchos proyectos destructivos más (Alley *et al*., 1995; Bullard, 1990; 1993; 1994; Čapek, 1993; Carroll, 1998; Cohen y O'Connor, 1990; Di Chiro, 1995; Goldman y Fitton, 1997; Johnston, 1997; Legerton y Legerton, 1990; Levine, 1982; Miller, 1995; Miller-Travis, 2000; Peña, 1998; Pulido, 1996; Schwab, 1994; Szasz, 1994; United Church of Christ, 1987).

Esta literatura es con frecuencia muy atractiva y útil, pero a la vez teóricamente problemática. Por ejemplo, Robert Williams (1999) examina dos momentos de la literatura sobre justicia ambiental que exponen las disparidades de clase y raza en la localización de sitios tóxicos. Mientras que en el primer conjunto encontró disparidades y en el segundo no, Williams descubrió que ambos aislaron el problema al centrarse en la justicia distributiva y la equidad de procedimientos que afectaba a empresas individuales operando en un mercado impersonal en comunidades autónomas. Al centrarse en la justicia distributiva y la equidad en lugar de observar los procesos sociales multiescalares fundamentales de la economía mundial capitalista, los activistas tienen poco margen de maniobra cuando los

procedimientos han sido justos y la distribución es solo un asunto de la economía de mercado.

En este trabajo utilizo un enfoque de estudio de caso urgente, típico de las preocupaciones activistas de la literatura sobre justicia ambiental. Pero enlazo la contaminación del río Anacostia con las fuerzas más amplias del colonialismo y la conquista, nacionalismo, militarismo, imperio, racismo, inequidad y renovación urbana. Para comprender estos amplios procesos, se requiere un método que indague los procesos, no las cosas, los flujos dialécticos que crean las nuevas relaciones que son internamente contradictorias y heterogéneas debido a los mismos procesos que las producen (Davis, 1998; Harvey, 1996). Estoy particularmente interesado en los procesos de formación del Estado y del gueto. Heyman (1994) capta la ecología local de la frontera entre Texas y México al describir un aparato estatal pesado, un capital móvil y personas en flujo, constreñidas por, pero también actuando contra, el Estado. Al igual que esa frontera, Washington D.C es un lugar donde el Estado pesa sobre la tierra, y los ciudadanos han experimentado procesos intensos de formación del Estado en sus vidas cotidianas, en el acceso a los recursos naturales y en sus reclamos a la ciudadanía. A finales del siglo XIX, cuando el Estado extendió sus poderes, nuevos funcionarios poblaron los barrios de la ciudad, una campaña ambiciosa de embellecimiento reconstruyó una ciudad capital apropiada para una nación poderosa y la ciudad perdió su gobierno autónomo para ser gobernada por encargados designados para los próximos cien años.

Washington comparte con muchas otras ciudades la experiencia histórica de la migración afroamericana hacia una urbe que prometía empleos, pero que luego segregó a los nuevos migrantes, para moverlos y formar guetos después de la Segunda Guerra Mundial. En todas las ciudades, estas campañas de renovación urbana se basaron en la ampliación de los poderes del Estado, pero en Washington se ligaron además a las ideologías del nacionalismo y el embellecimiento de la capital (Bartelt, 1993; Bennett, 1999; Grossman, 1990; Hirsch, 1983; Hirsch y Mohl, 1993; Judd, 1999; Kusmer, 1976; 1995; 1997; Marcuse, 1997; Paris, 1998; Sugrue, 1996).

Por último, me baso en el trabajo de Logan y Molotch, quienes ven la gran contradicción de la vida urbana como la lucha entre los valores de uso y de cambio (Logan y Molotch, 1987; Logan *et al*., Whaley y Crowder, 1997). Los inquilinos buscan valores de cambio mediante las ganancias que pueden ser extraídas con un uso cada vez más intensivo de la tierra, que se puede arrendar, vender o desarrollar para maximizar las rentas. Esta búsqueda del valor de cambio inevitablemente entra en conflicto con los valores de uso, que derivan de los beneficios que los residentes encuentran al vivir en cierto lugar: sus paseos cotidianos mientras hacen ejercicio, visitan, compran y manejan las necesidades del hogar; las redes de apoyo que construyen para ayudar con los quehaceres, el cuidado de los niños y las emergencias; los sentimientos que atribuyen a un lugar al nombrarlo e identificarse con él. El conflicto entre los valores de uso y de cambio por lo común se resuelve a favor de los valores de cambio, pues la mayoría de las instituciones en una ciudad favorecen el crecimiento progresivo, y buena parte de los políticos son políticos del crecimiento. Durante muchos años, el río Anacostia ha sido un sitio de la lucha en torno al uso y el intercambio, desde la conquista británica nutrida por la pasión de la clase alta europea por los sombreros de castor, mediante el cultivo en plantaciones de tabaco para los mercados mundiales, el deseo de los colonos de apropiarse de los recursos de Ohio para el comercio europeo y la actual iniciativa de desarrollar el río para el turismo.

En cada caso, los valores de uso de los habitantes del río, quienes pescaron, cultivaron, navegaron y encontraron la paz y la sociabilidad en el río, avivaron el conflicto (Cox, 1998). Mis estudiantes, etnógrafos comunitarios y yo hemos trabajado en barrios de las orillas del este y occidente del río Anacostia durante cinco años. Hemos trabajado con el Seafarers Yacht Club y la Anacostia Watershed Society para apoyar sus actividades de limpieza y presentar sus programas en el National Mall. Hemos aprendido mucho sobre los valores de uso de los residentes junto con los problemas y posibilidades de organizar y articular las preocupaciones de los residentes con las personas que se encuentran "en el poder". Hago referencia a las perspectivas de los residentes y activistas de la cuenca hidrográfica a lo largo del artículo.

Utilizando una ecología política dialéctica de un río urbano, examino los conflictos entre la economía y el ambiente y las relaciones históricas de poder desigual que enmarcan las contradicciones entre los valores del uso y del cambio, la formación del Estado y los reclamos de la ciudadanía, la movilidad del capital y la inmovilidad del Estado, la degradación y el activismo ambiental. Abordo cinco transformaciones del río Anacostia, su ecosistema y la vida de sus vecinos.

Empiezo con la conquista británica, que afligió a las comunidades indígenas con sarampión, viruela, tos ferina y la demanda de sombreros de castor. A continuación, presto atención a cuatro momentos sucesivos en la formación del Estado. En primer lugar, los aspirantes a nacionalistas se preguntaron cómo construir una ciudad capital y visualizaron el río como un acceso imperial hacia el oeste de América del Norte. Un siglo después, oficiales del Gobierno fortalecieron este débil y oculto Estado mediante una administración pública centralizada, un ejército permanente y trenes que operaban en el mismo horario, de manera que sus poderes fueron más sistemáticos y evidentes. En la década de los cincuenta, la visión de los desarrolladores de una capital mundial donde los visitantes pudieran observar monumentos prístinos requería la eliminación de los residentes del centro hacia el este del río Anacostia. Se construyeron grandes avenidas para permitir a un significativo número de turistas y residentes manejar hacia el centro. En la cuenca estas carreteras de la "fuga blanca"[4] atraparon y descargaron agua de lluvia, rebosante de aceite, hacia el río ya contaminado por completo. En la actualidad, un Estado neoliberal y sus aliados afines a la política de crecimiento esperan abrir el río para el desarrollo. Captan y socavan los esfuerzos de los activistas de justicia ambiental, quienes han señalado claramente los sitios y actividades que ensucian el río, iniciaron demandas contra las agencias responsables del Estado, y celebraron el regreso de águilas pescador, garzas azules, garcetas y águilas calvas a las orillas del río. En cada una de estas transformaciones, los líderes políticos aprovecharon el río para desarrollar una nueva infraestructura donde tenían que vivir los demás. Sin embargo, las

4 N de T. "White flight" en el original se refiere al fenómeno donde la población blanca se muda hacia zonas suburbanas racialmente más homogéneas.

contradicciones plagaban cada nueva e inestable formación ideológica, social y ecológica.

El tabaco y los sombreros de castor

Durante 11 000 años los humanos han vivido en las orillas del río Anacostia, desde que las vastas capas de hielo del Pleistoceno empezaron a derretirse y bosques densos caducifolios emergieron en el este de América del Norte. Morteros de piedra, mangos de mortero y piedras de moler dan testimonio de una adaptación fluvial y forestal mediante tecnologías de recolección de alimentos y el procesamiento de nueces ricas en proteína, semillas, granos silvestres, pescado, moluscos y mariscos. En los valles del río, pequeñas bandas seminómadas explotaron los recursos alimenticios estacionales y establecieron campamentos para recolectar, cazar, pescar y atrapar animales. Hace unos 4 000 años, el calentamiento del post-Pleistoceno había alcanzado su culmen, y las grandes poblaciones migratorias cosecharon sábalo, arenque, percas y esturión, que migraban estacionalmente al norte a las rocas y cañones de Great Falls. La gente empezó a fabricar azadones y palos para excavar usando conchas y canteras locales ricas en esteatita, túnicas con cortezas y pieles, y casas con armazones de postes cubiertos con maleza o esteras.

Estas poblaciones desarrollaron la agricultura hace unos 1 000 años, cultivando al mismo tiempo frijoles y maíz, para que los frijoles pudieran trepar a los tallos y proveer fertilizantes nitrogenados para el maíz. Las calabazas y los girasoles se extienden por los espacios entre los pequeños montículos de maíz; el tabaco creció en sus propias parcelas sagradas, y las comunidades se reubicaron con frecuencia para favorecer el descanso del suelo. Cosecharon pescado, mejillones, tortugas, anguilas y la vegetación exuberante de los humedales. Es probable que enterraran sus muertos en osarios. Conchas y rocas de Maine testifican el comercio hacia el norte y el sur a lo largo del río Potomac.

Cuando llegaron los europeos, grupos matrilineales y matrilocales, dirigidos por jefes masculinos que heredaban sus cargos, aliados por

parentesco y lazos políticos a otras comunidades, ocuparon la orilla oriental del río Anacostia en pueblos empalizados. Los arqueólogos aún discuten si la postura militante de las empalizadas precedió al contacto europeo. Los nacotchtank pueden haber participado en una confederación poderosa dominada por los piscataway, temidos por ser agentes de los terribles iroqueses.

Cuando John Smith navegó hasta el pueblo Nacotchtank en 1608, encontró tal vez unos trescientos nacotchtank asentados en agrupaciones dispersas en casas con techos abovedados hechos de pieles animales y postes curvados, al lado de parcelas donde practicaron la agricultura de subsistencia, cazaron y pescaron. Smith reportó bosques exuberantes, un río cristalino, indios navegando en canoas cargadas con carne de venado, oso, búfalo, y pavos y pescado tan abundante que él podía recogerlos con un sartén. Nacotchtank prosperó como un centro importante de comercio debido a su riqueza en recursos como pescado, búfalo, oso y pavo; un clima agradable y saludable; suelo fértil; y las alianzas estratégicas que sus líderes forjaron con grupos del interior. Su pueblo, hoy en el barrio de Benning, parece haber experimentado varios episodios de destrucción y reconstrucción. Smith observó una gran residencia real, cerca de treinta estructuras residenciales, empalizadas construidas con árboles vivos y una fuerza militar compuesta de unos ochenta guerreros.

En 1623, el comerciante de pieles y cuentista Henry Fleet dirigió río abajo a un grupo de colonos ingleses de Jamestown, aliados con los patawomeke, para atacar Nacotchtank, llevando a mujeres y niños al bosque; mató a dieciocho personas y saqueó e incendió el pueblo. Los nacotchtank se refugiaron con parientes y buscaron venganza el año siguiente, cuando asaltaron Patawomeke y tomaron prisionero a Henry Fleet. Lo retuvieron hasta que logró escapar unos cinco años después, cuando, sin desanimarse, zarpó hacia Inglaterra y buscó apoyo para realizar su sueño de construir un monopolio del comercio de castor en la costa este, que los europeos habían iniciado en América del Norte desde 1500, para abastecer a la clase alta inglesa con sombreros de piel que les permitiera diferenciarse de los inmigrantes que llevaban gorra. Fleet fue un negociador astuto y un fanfarrón legendario: para atraer a los comerciantes de Londres a

invertir en sus proyectos, juraba que los indios de los bosques orientales espolvoreaban sus pinturas con polvo de oro, que comerciaban con piedras preciosas y que cazaban "muchos zorros negros, que de todos es el que tiene el pelaje más rico […] Con sus relatos color de rosa, inducía a los comerciantes de Londres a participar en el comercio del castor de Potomac" (Neill, 1876: 11).

Griffith y Compañía, propietarios de la embarcación Warwick, que llevó a Fleet a muchas de sus aventuras, se quejaron de que habían enviado la nave a Virginia para su exploración y comercio, pero que "Fleet había retenido la nave y las ganancias para su gran pérdida". En ese momento, los comerciantes londinenses consideraban que todos los virginianos eran "hombres deshonestos", y Fleet también, pero que además era "un hombre especialmente aceptado por los salvajes, que estaba familiarizado con su lenguaje y era conocedor del paisaje" (Neill, 1876: 15-16). Fleet viajaba desde Virginia a Nueva Inglaterra, recolectaba maíz con los indios y convencía a los nativos a colectar las pieles de castor en el invierno y guardarlas hasta que él regresara en la primavera. A cambio, ofrecía mercancías inglesas: "En el comercio, a los indios les encantan las hachas y los cuchillos grandes, tela de paño, abrigos, camisas y medias escocesas. Las mujeres desean las campanas y algunos tipos de cuentas" (Fleet, en Neill, 1876: 30). A pesar de su reputación, él alababa su hogar ribereño:

> Este lugar es, sin duda, el más agradable y saludable en todo este país, y el más conveniente para habitar, el aire templado en el verano y nada violento en invierno. Es abundante en todo tipo de pescado. En una noche los indios pueden capturar treinta esturiones en un lugar donde el río no supera las doce brazas de ancho. Los bosques están llenos de venados, búfalos, osos y pavos, y el suelo es sumamente fértil. Pero más arriba de este lugar el paisaje es rocoso y montañoso como Cannida (Neill, 1876: 27).

Fleet reportó que en ocasiones cientos de indios se congregaron en este punto comercial privilegiado y que los intermediarios nacotchtank controlaban lucrativas redes sociales y políticas en todos los rumbos. Fleet también admiraba a los nacotchtank por su riqueza, abundancia de casto-

res, amplios lazos políticos y comerciales, y por el miedo que inspiraron en otros grupos. El nativo americano al que llamaba el Emperador temía a los nacotchtank debido a sus poderosos patronos, y varias veces le impidieron consumar tratos importantes. Fleet obtuvo "800 en peso" de castores en Nacotchtank y envió mensajeros al norte a proclamar sus intenciones, lo que atrajo a más de cien indios que transportaban cuatro mil en peso de castor. Sin embargo, los líderes nacotchtank le notificaron que ellos monopolizaban el comercio y ofrecieron entregar todos sus castores en caso de que pudiera "hacer una alianza firme con ellos y entregara un regalo a su rey". Fleet declinó y aparentemente nunca pudo dominar este rico y destructivo comercio (Fleet, 1876: 9-37; Gardner, 1996; Humphrey y Chambers, 1977; Neill, 1876). Los pequeños castores de una libra y media fueron rápidamente cazados, y el comercio continuó implacable hacia el oeste.

Muy pocos castores frecuentan las orillas del río Anacostia hoy en día. Los osos y lobos perdieron una fuente importante de alimento, pero los castores no son en sí mismos depredadores sobresalientes, y sobreviven de maderas como el álamo, abedul, arce y sauce. Sin embargo, el fetichismo de la mercancía que transformó castores en sombreros ingleses produjo problemas ecológicos en la cuenca. Las presas de los castores ayudan a prevenir la erosión que afectó la cuenca más tarde, y sus estanques ofrecen un hábitat para diversas especies. Algunos insectos ponen sus huevos allí, los peces se alimentan de larvas de insectos, y las aves acuáticas, nutrias, visones y ciervos vienen a comer y a beber.

Los nacotchtank eran agricultores cuidadosos, pero en el momento del contacto registrado con los europeos estaban inmersos en asuntos problemáticos. Las ganancias, la avaricia, la competencia y el comercio del castor transformaron las relaciones sociales a lo largo de América del Norte y afianzaron un comercio dominado por varones; conformaciones del hogar más pequeñas y nucleadas; rivalidades; traiciones, guerras intensas de gran alcance, y competencia feroz (Wolf, 1982). Ninguna de las comunidades nacotchtank sobrevivió. Hoy en día, la base de la Fuerza Aérea de Bolling y la Empresa Eléctrica de Potomac sepultan los asentamientos nacotchtank. Tal vez nunca sabremos mucho más de ellos, ya

que coleccionistas aficionados saquearon sus asentamientos hacia finales del siglo XIX y depositaron cientos de artefactos en las bodegas del Smithsonian Institution (Figura 1). Lo que sabemos es que las empresas coloniales trajeron a la cuenca su primera experiencia del conflicto entre los valores de uso y de cambio, a medida que los castores se convirtieron en sombreros.

La construcción de la nación y el imperio

Durante el siglo XVIII, los europeos reemplazaron por completo a los habitantes indígenas, la economía fluvial se desplazó a la acumulación intensiva de capital y Washington se convirtió en un puesto de avance colonial de Inglaterra. El cultivo de tabaco se extendió de Virginia hacia el norte, alrededor de la bahía de Chesapeake, donde llegó a ser conocido como el mejor humo del mundo. La esclavitud fue siguiendo los sitios donde mejor crecía el tabaco, y los inmigrantes británicos se hicieron ricos e influyentes especulando con tierras y cultivando tabaco en suelos bien cuidados, casi vírgenes, aunque delgados y arenosos. El río Potomac y su rama oriental (renombrada Anacostia en 1793) aceleraron la colonización y volvieron rentable la producción de tabaco a gran escala. Ávidos por las ganancias rápidas, los agricultores solo sembraron ese cultivo de forma intensiva, para lo cual dependían de una constante fuerza de trabajo de esclavos africanos. Los granjeros alemanes evitaban los fertilizantes y abandonaban cada parcela después de tres años. La plantación típica quizá abarcaba entre quinientos y mil acres, con solo unos treinta acres cultivados cada vez. Cuando los propietarios habían agotado por completo un terreno, se adentraban en los bosques y limpiaban la superficie que fuera necesaria.

FIGURA 1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN WASHINGTON, D.C.

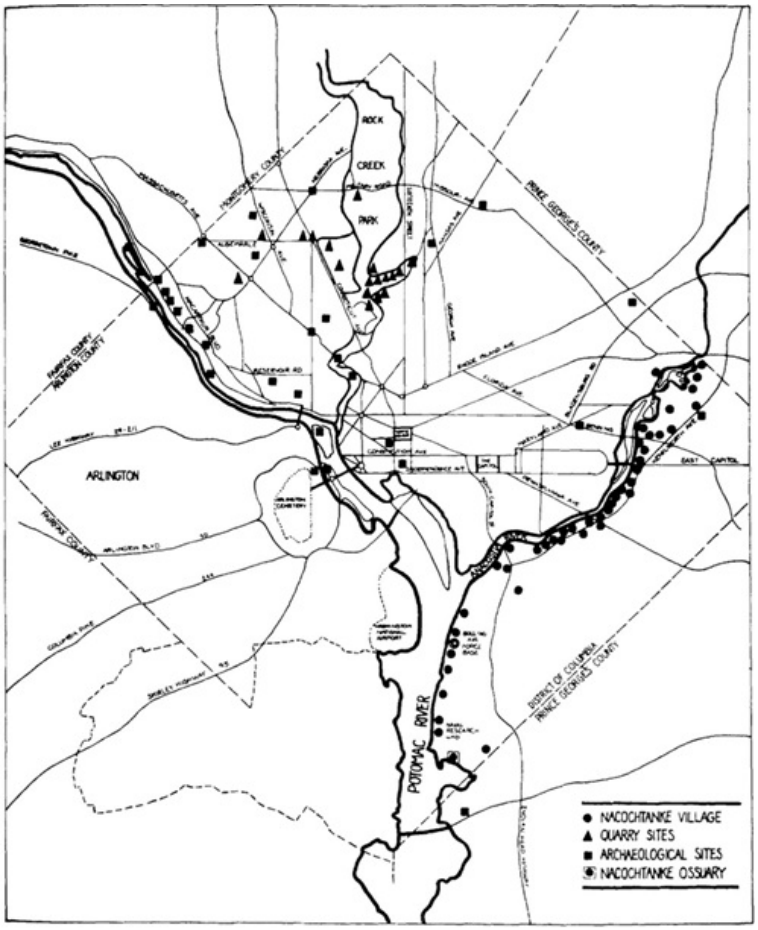


Figura 2. Plano de la ciudad de 1800. Cortesía de la Sala de Libros Raros y Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso.



Para mediados de siglo, la producción de tabaco fue suficiente para satisfacer la capacidad de las grandes naves de alta mar que navegaban el río Anacostia hasta su desembocadura en Bladensburg, en Maryland, donde llenaban sus bodegas con tabaco, listas para navegar a través del Atlántico. Pero arrebatan campos a los bosques, lo que produjo suelos secos y quebradizos. Los terratenientes drenaron los nutrientes de los suelos más rápido de lo que la tierra podía regenerarlos, y la tierra baldía se erosionó debido al agua de lluvia y la nieve derretida. El sedimento de estos emprendimientos desastrosos llenó el río Anacostia, haciéndolo poco profundo, e irónicamente esto produjo que las naves, construidas en los astilleros de la Marina en la orilla occidental, no pudieran llegar al mar. Después de solo cien años, el cultivo de tabaco se había agotado. El río se hizo cada vez menos profundo y pantanoso, los productores de tabaco se dedicaron a proyectos más pequeños

y restaurativos con maíz u otros cereales (con frecuencia para abastecer las destilerías locales); el astillero naval comenzó a fabricar armas de fuego y barcos cañoneros; y los africanos esclavizados trabajaron para ganar su libertad y asentarse cerca. El Anacostia se embarcó en un viaje histórico que lo transformaría, pasando de ser una forma de vida a una barrera en las relaciones sociales de la ciudad: los colonos mejoraron sus muelles y construyeron molinos de harina, almacenes y cómodas casas de pesca para rentar, pero, tan destructivos como los productores de tabaco que los precedieron, habían sobrepescado el río para finales del siglo XVIII (Hutchinson, 1977: 53). Los granjeros de segunda y tercera generación, muchos de ellos pobres, estaban ansiosos por liquidar sus propiedades a los fundadores de la nueva capital.

Los fundadores del nuevo Estado se aferraron a una visión imperial: conquistarían el oeste mediante la navegación de los ríos, construirían caminos y canales, abrazarían una patria en expansión y aprovecharían sus ricos recursos para el comercio mundial. Ubicada en el extremo accesible del río Potomac, y suficientemente al interior para estar protegida de los ataques marítimos, la nueva capital uniría la costa y el interior occidental, incluyendo Virginia, Maryland y el Valle de Ohio en un núcleo dominante de la nueva nación. El sitio del nuevo Distrito de Columbia aparentemente ofreció, entre las ciudades portuarias del Atlántico, el mejor acceso al Valle de Ohio y al oeste, claves para la expansión territorial y la unidad nacional. Los desplazamientos y el tráfico hacia el norte y el sur por medio de las colonias podrían cruzar los anchos ríos de marea que surcaban la llanura costera. Anidada en la llanura entre dos ríos, la nueva capital ocupó una cuenca donde la planicie costera se encontraba con la meseta del Piamonte, abarcando una gran diversidad en sus arroyos y manantiales, bosques y pantanos, terrazas de río y amplias planicies aluviales. Su variada geología albergó climas muy diferenciados y un amplio abanico de especies de plantas y animales en un radio pequeño. A pesar de la sobrepesca, en 1759 George Washington aún aclamaba la abundancia de peces en el Anacostia. Observaba peces en todas las estaciones y disfrutó en particular de la primavera cuando el sábalo, el arenque, la perca, la carpa y el esturión jugueteaban en el río. Las aves migratorias, pavos, codornices y otras aves de caza estaban asociadas a la pesca tanto económica como ecológicamente. Washington y otros fundadores

de la capital estaban seguros de que la ciudad crecería hacia el este y que el río Potomac se convertiría en un pilar para el comercio y los viajes entre Europa y el Medio Oeste de Estados Unidos (Abbott, 1999).

Pierre L'Enfant planeó una ciudad inspirada en el sur de Europa, con grandes avenidas diagonales, plazas llenas de agua y árboles para acondicionar naturalmente el aire y aliviar el calor extremo del verano en la cuenca (Figura 2). Algunos relatos históricos retratan la Washington del siglo XVIII como una bucólica ciudad ribereña; otros, como un lodazal sofocante. Todos están de acuerdo en que el estado de los tribunales y partidos políticos era inicial. En tres áreas de asentamiento se encontraban las casas de huéspedes solteros en el Capitolio, la comunidad diplomática y ejecutiva alrededor de la Casa Blanca, y, en la orilla occidental del Anacostia, "el pueblo de las fuerzas armadas", incluyendo el astillero de la Marina y los cuarteles de los marinos, quienes fungían como vigilantes de los edificios públicos y como músicos en las ceremonias oficiales y eventos sociales. En 1806, "tiendas de bebidas, casas de citas para los marineros y sus prostitutas, y comerciantes del orden más bajo" frecuentaban esta comunidad tan viva (Young, 1966: 70).

En 1854, la Corporación de Desarrollo de Uniontown invirtió en una subdivisión. La Uniontown invitó a los empleados del astillero a tomar el trolebús hacia el otro lado del río Anacostia y vivir en una comunidad donde ninguna propiedad podría ser "vendida, rentada, arrendada, o de ninguna manera transferida a cualquier negro, mulato o alguien de descendencia africana" (Hutchinson, 1977: 53). Los cerdos y la práctica de hervir jabón también se prohibieron en Uniontown, pero el mayor atractivo residía en el pacto restrictivo que liberaría a los residentes blancos de la clase trabajadora de los afroamericanos de la orilla occidental que invadía allí sus casas. Los blancos habían manifestado su descontento mediante varios incidentes desagradables y violentos, incluyendo un disturbio organizado en el restaurante del propietario de raza mixta Beverly Snow. Muchas de estas comunidades restringidas emergían a lo largo de las rutas del trolebús y tranvías durante el siglo XIX, pero Uniontown se distinguía por su ubicación. La mayoría, junto con la ciudad, creció hacia el norte y el oeste; el área al este del río se mantuvo pantanoso y silvestre, y el río se subdividía en canales que discurrían entre islotes cubiertos de arbustos y grandes superficies de arroz silvestre (Gillette, 1995).

Para mediados del siglo estos distintos emprendimientos reflejaban algunas de las contradicciones que aquejaban a la ciudad y al río. Aunque los ríos iban a ser el sustento comercial de Washington, L'Enfant imaginó una comunidad dependiente. Las características más prometedoras de su plan, en términos ecológicos, su vegetación y sus plazas llenas de agua, fueron borradas cuando él fue despedido. Washington iba a ser la sede del gobierno nacional, pero los nuevos gobernadores no querían vivir en una cuenca húmeda y bochornosa. El astillero de la Marina construyó armas y barcos de cañón diseñados para satisfacer las ambiciones imperiales de Estados Unidos, pero en el proceso el río se hizo demasiado lodoso para permitir el paso de los barcos. El Ejército no solo produjo contaminación, sino que también trajo a la ciudad el comercio sexual y sus enfermedades asociadas, y una exasperada comunidad obrera blanca que no podía soportar a sus vecinos negros. La gran presencia afroamericana en Washington atestiguó su extraña posición geográfica entre Norte y Sur y los restos del comercio fluvial de esclavos y las plantaciones de tabaco que habían profanado el río. El segundo gran negocio de tierras de la ciudad, la fundación de Uniontown, fue un intento para aprovechar de las tensas relaciones raciales al oeste del río, pero, como los primeros proyectos, fracasó de manera estrepitosa. Y la raza, la contradicción permanente de la ciudad, era también un problema nacional.

En 1861 Washington se preparó para la guerra fortificando su accidentado perímetro con fuertes de tierra. Estos fuertes nutrían las "hogueras de vigilancia de 100 campamentos alrededor", donde Julia Ward Howe creyó que había visto a Dios mientras componía el *Himno de guerra de la república* desde su cuarto con sus vistas de la ciudad en el céntrico hotel Willard (Figura 3). Proteger a la ciudad exigía una deforestación masiva, que desmontó el perímetro montañoso para que los guardias pudieran detectar un acercamiento de los confederados. Aunque solo uno de los fuertes entró en combate, la Guerra Civil dejó huellas en la vida del río y de la ciudad. El Gobierno federal asumió poderes más allá de sus propias posibilidades. Los soldados talaron cientos de árboles al este del Anacostia para disuadir la llegada de espías desde el sur, acelerando la erosión de tierras y llenando el río con lodo. El lado positivo fue que miles de esclavos africanos hicieron su camino hacia el norte para encontrar refugio en los fuertes, y, después de la guerra, comenzar nuevas vidas como personas libres

en varias comunidades en el área de Washington. La comunidad más próspera estaba al lado del río, Barry Farms, establecida en un terreno comprado a Freedman's Bureau en 1867, donde los residentes trabajaban largas jornadas dobles vendiendo productos diversos y pescado en los mercados fluviales para construir sus casas. Louise Hutchinson cita el libro de W.B. Bryan *A history of the national capital*:

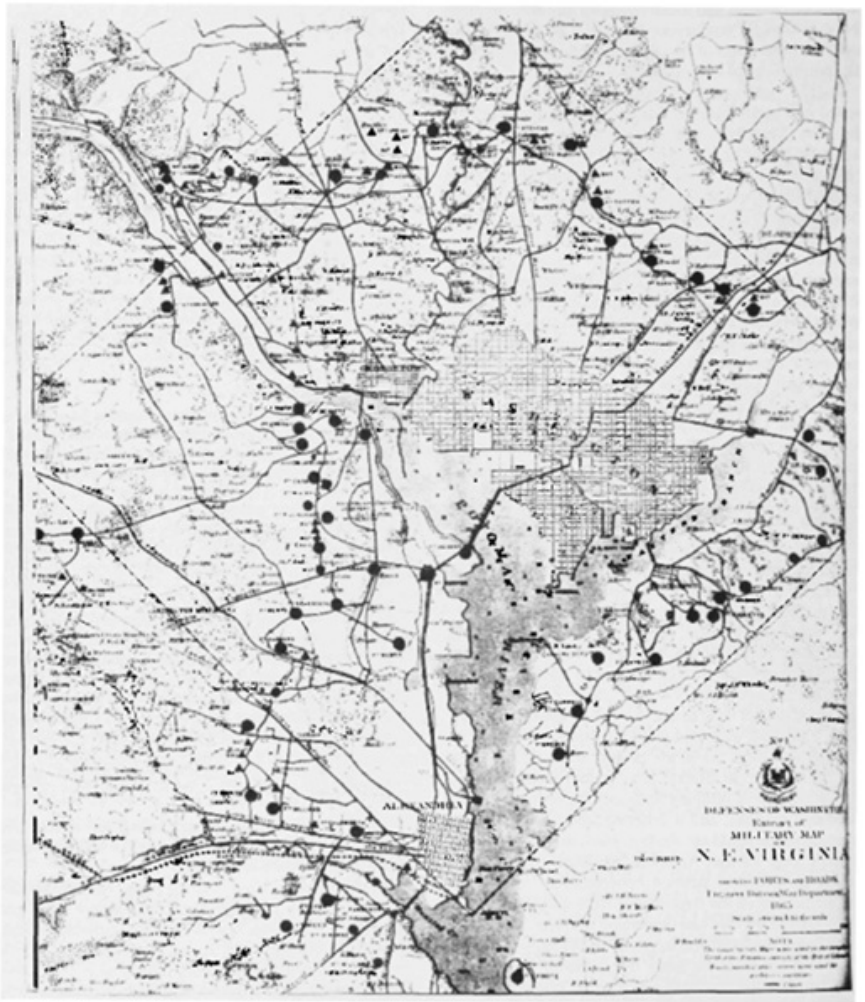
> Para poder comprar propiedades, familias enteras trabajaban en la ciudad todo el día y por la noche caminaban a Barry's Farm para desarrollar sus tierras y construir sus casas a la luz de linternas y velas. Como lo describió un hombre, "las colinas y los valles estaban salpicados con luces […] El sonido del azadón, pico, rastrillo, pala, sierra y martillo sonaron hasta altas horas de la noche". Los hombres de la comunidad ejercían diversas ocupaciones: granjeros, jardineros, herreros, cocineros, y carpinteros, y algunos se dedicaban a la construcción en la ciudad. Otros encontraron trabajo en el astillero o el Hospital de St. Elizabeth […] Buena parte de los empleados en trabajos estacionales sufrieron mucho en los meses de invierno. Para complementar el ingreso familiar, los hijos ejercían oficios ocasionales, cortaban leña y trabajaban como repartidores. Las esposas e hijas se ocupaban de la lavandería, trabajaban como costureras o se empleaban como sirvientas o trabajadoras domésticas para familias en la ciudad o en Uniontown. Como anteriormente habían hecho las esclavas, algunas esposas de Barry's Farm vendieron flores, fruta y verdura en la ciudad los días de mercado. El río Anacostia, abundante en pescado para la mesa de la familia, también produjo un ingreso para los comerciantes que vendían mariscos en la parte de atrás de las carrozas tiradas por caballos (Hutchinson, 1977: 89).

A diferencia de Uniontown, Barry Farms prosperó, y los residentes cambiaron su nombre a Hillsdale para borrar el nombre del esclavista que había sido propietario de la antigua plantación.

Para finales de la Guerra Civil, el astillero de la Marina había reducido su fuerza de trabajo en 20%; los empleados que se quedaron se dedicaron en su mayoría a trabajos de reparación, ya que la construcción naval se detuvo por completo en 1876. El Anacostia no podía expulsar los sedimentos de su cauce. El lodo simplemente se hundió al fondo del río y allí languideció. De los

cuarenta pies de profundidad con que contaba a inicios de siglo, el río apenas conservaba ocho pies, muy poca profundidad para los grandes buques. Para 1875, el río Anacostia se había convertido en "una enorme masa ondulante de vegetación espesa" (Gillette, 1995: 73). Siglos de erosión y deforestación había producido una extensa zona de llanuras fangosas cubiertas de pastos densos, arroz silvestre y pequeñas islas con arbustos.

Figura 3. Cinturón de fuertes de 1865. Cortesía de la División de Geografía y Mapas de la Biblioteca del Congreso.



El lodo era tan blando que los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se hundieron un metro o dos al intentar inspeccionar el río. Para empeorar el escenario, ocho emisarios vertían a diario diez millones de galones de aguas residuales sin tratar al río desde su confluencia con el Potomac hasta Bladensburg, Maryland. Cuando la marea bajaba durante esos años, las aguas residuales ahogaban las densas hierbas acuáticas, burbujeaban y fermentaban, y daban la bienvenida a los mosquitos de la malaria, en especial durante los opresivos veranos de Washington. Los empleados del astillero, los reos de la cárcel de D.C. y los internados en el hospital gubernamental para enfermos mentales sufrieron y murieron de malaria en proporciones alarmantes.

Uniontown, Barry Farms/Hillsdale y el río Anacostia iluminaron el mundo en un grano de arena, o en una gota de agua sucia, en los albores del siglo pasado. Los residentes de Barry Farms/Hillsdale podrían haber vivido solo en unos pocos sitios rurales en el distrito de Columbia, más allá de su sofocante Cinturón Negro, debido al poder y la prevalencia de las cláusulas restrictivas de vivienda (Figura 4). La clase trabajadora blanca residente de Uniontown sufrió la caída vertiginosa de las oportunidades de empleo en el astillero naval a medida que el río se volvía intransitable. Mientras las ambiciones imperiales de la capital buscaban salvavidas fuera de las vías fluviales, la ciudad le dio la espalda a sus ríos y las personas ricas se desplazaban en las líneas del tranvía y trolebús para dejar atrás las planicies del río al norte y oeste. Los residentes más pobres del distrito, en su mayoría afroamericanos, fueron dejados atrás. Mary Church Terrell, graduada de Oberlin, describió la ciudad que conoció a principios del siglo XX:

> He vivido en Washington durante cincuenta años, y aunque distaba de ser un "paraíso" para las personas de color cuando yo llegué, desde entonces se ha esforzado para hacer las condiciones para ellos intolerables. Como una mujer de color, podría entrar a Washington cualquier noche, un extraño en una tierra extraña, y caminar millas sin encontrar un lugar para descansar. Los hindúes, japoneses, chinos, filipinos y representantes de otras razas oscuras pueden encontrar alojamiento en un hotel, por regla general, si pueden pagarlo. El hombre o la mujer de color son los únicos expulsados de hoteles de la capital nacional, como leprosos. Como una mujer de color, puedo caminar desde el capitolio

> hasta la Casa Blanca con mucha hambre, y con dinero para comprar un almuerzo sin encontrar ni un restaurante en el que se me permitiera comer si fuera frecuentado por clientes blancos, a menos que estuviera dispuesta a sentarme detrás de una pantalla […] No tengo forma de ganarme la vida honradamente en la capital nacional, a menos que esté dispuesta a ser una sirvienta doméstica, si no soy enfermera profesional o modista, o que encuentre un empleo en las escuelas públicas. Y, sin embargo, constantemente se critica y culpa a las personas de color en la capital nacional porque dependen de la asistencia pública […] Y podría seguir citando ejemplo tras ejemplo para mostrar las maneras en que nuestro grupo es sacrificado en el altar del prejuicio racial en la capital de Estados Unidos y qué tan grandes son los obstáculos que bloquean el camino de las personas de color al éxito (1968 [1940]: 383-396).

Durante la Guerra Civil el Gobierno nacional había asumido poderes que superaban su infraestructura. A finales del siglo XIX y principios del XX, más guerras, industrialización, una frontera en vías de desaparecer, el crecimiento de las grandes ciudades, la intensificación de los conflictos de clase, el aumento de la población, el avance de la tecnología y la creciente complejidad de la vida cotidiana crearon un ambiente nuevo para el Gobierno. Los funcionarios lucharon por un Estado más centralizado y burocrático que estuviera también aislado de la población en general. Pusieron el distrito de Columbia bajo el gobierno de tres comisionados elegidos por el presidente, y encabezado por el jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para contener las impredecibles movilizaciones partidistas, el Estado estableció una administración pública que sería más sistemática, permanente y no partidista. El Acta Pendleton de Administración Pública de 1883 instituyó exámenes competitivos y normas para la contratación, pago, promoción y despido de trabajadores del Gobierno. Este cambio llenó a Washington con residentes más o menos permanentes que continuaron abandonando la cuenca y seguían las rutas del trolebús, pavimentaron las calles y llevaron servicios públicos hasta las colinas. El Gobierno también creó un ejército permanente para reemplazar a los soldados-ciudadanos, quienes una vez habían asegurado las fronteras; inmensas instalaciones aéreas, militares y marítimas eclipsaban al Navy Yard en ambas orillas del Anacostia. La Comisión de Comercio Interestatal, establecida en 1920 después de la crisis de transporte de carga durante la Primera Guerra Mundial, hizo

que el aparato del Estado se impusiera sobre fuerzas poderosas de la sociedad industrial, regulando tarifas, salarios, horarios y programas, y extendiendo la autoridad federal hacia el exterior de Washington para mediar las relaciones entre ferrocarriles, transportistas y pasajeros (Skowronek, 1982).

Pero los funcionarios también cosecharon un cúmulo de contradicciones: una ciudad capital llena de ciudadanos que no podían votar, leyes Jim Crow[5] que oprimían más aún a los afroamericanos, y un Estado distendido y torpe cuyas oficinas comenzaron a sofocar el núcleo central de Washington, ya saturado de residentes afroamericanos, expulsados de otros barrios. A principios de siglo, la Comisión McMillan del Senado inició una larga campaña para embellecer el núcleo central con una gran avenida para museos, parques integrados y santuarios nacionales. La Oficina de Edificios Públicos y Terrenos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército inició su metódico programa de identificación, mejora y mantenimiento. La Comisión y sus diseñadores adornarían y legitimarían así los nuevos poderes del Estado burocrático distendido (Barthold, 1993). Terminaron de reclamar las planicies del Anacostia en 1926, colocando un lago y dos islas en el río y reorganizando sus orillas para conformar un parque nacional (*Washington Sunday Star*, 1926). Cada día se congregaban tantos funcionarios en el centro que se avecinaban crisis de transporte. Entre 1920 y 1930 se cuadruplicaron las matrículas de automóviles en el distrito, y los desplazamientos diarios de trabajadores se duplicaron de 48 000 en 1925 a 108 500 en 1940. Mientras tanto, las instalaciones militares se asentaron firmemente sobre las orillas del río Anacostia, donde depositarían toxinas cada vez más mortales a medida que avanzaba el siglo XX.

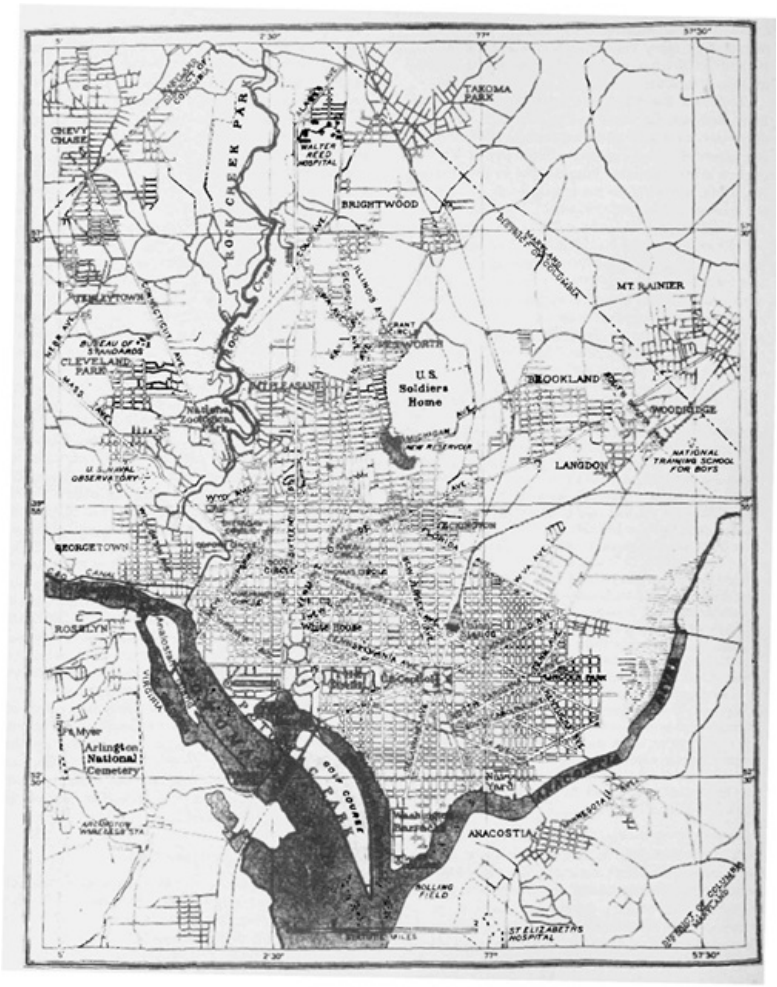
La ciudad de chocolate

Bob Martin, trabajador jubilado de la construcción, aprendió a construir barcos para navegar el Anacostia en 1945, cuando descubrió que no le era permitido alquilar un bote de remar en el Potomac. Cincuenta años después le dijo a Vernon Loeb:

5 N de T. Las leyes de segregación conocidas como Jim Crow representaban un sistema formal de *apartheid* racial que dominó el sur de Estados Unidos durante tres cuartos de siglo a partir de la década de 1890.

Este ha sido mi río. Amo este río. Este río siempre me ha correspondido. Antes podías meterte en este río. No puedo en absoluto describir la sensación […] solo tener ese remo en el agua […] es terrible, es horrible y maloliente a veces. Sin embargo, no puedo olvidar mis raíces […] el río Anacostia y el viejo Washington, D.C. (Loeb 1996, B01).

Figura 4. Washington. D C. en 1923.



Fuente: Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

Ese año, Lewis Green fundó el Club de Yates Seafarers, el primer club de yates afroamericano en el país, sobre el río Anacostia:

> Un amante de los ríos, inició su búsqueda de un hogar para su bote. En su búsqueda, encontró un pantano aislado. Inspeccionando, pensó en lo que se podría hacer con ello. Preguntó acerca de la tierra, y se le informó que pertenecía al Departamento del Interior [...] Poco después de su reunión con el subsecretario, Sr Green, se reunió con algunos de sus colegas, y empezaron a soñar. El sueño ofrecería a los afroamericanos la oportunidad de participar en el disfrute de las vías fluviales mediante paseos seguros en barco y un espíritu deportivo de caballeros. Después de esperar con paciencia durante meses, sin respuesta del Departamento, presentaron su visión a la Sra. Mary McLeod Bethune, una educadora del pueblo. La Sra. Bethune, una ayudante de Asuntos Afroamericanos del presidente Franklin D. Roosevelt, intercedió y arregló una reunión con el Sr. Harold Ickes, en ese momento subsecretario del Departamento del Interior (Seafarers Yacht Club, s.f.)

El capitán del Club Howard Gassaway me dijo: "Ickes nos encontró un pequeño lugar hacia el final de los puertos deportivos" .

Pero en 1947 el río Anacostia estaba peligrosamente sucio. La reportera Sue Barnes, del *Pittsburgh Courier*, informó que nueve niños se habían ahogado en "las aguas fangosas y sucias" en los últimos cuatro años: "La muerte en las repulsivas aguas del río Anacostia en el noreste de Washington acecha infaliblemente a dos o quizá tres", una situación exacerbada por la insuficiencia de las "piscinas Jim Crow" (Barnes, 1947: 1) Así, los ciudadanos a las orillas del Anacostia experimentaron la fractura política del Estado, la segregación racial y la privación de derechos aun cuando lucharon por reclamar el río como propio.

La Segunda Guerra Mundial colocó a Washington en el escenario mundial y, de hecho, en primer plano (Amsler, 1997). La guerra también llenó la ciudad con gente necesitada de vivienda: migrantes negros del sur, soldados que regresan y veteranos sin hogar. Esta difícil situación impulsó a la Oficina de Información de Guerra a encargar fotografías idealizadas de la ciudad

capital que mostraran la vida cotidiana de empleados negros del Gobierno imaginarios, poco representativos, trabajando, comiendo y paseando junto con sus colegas blancos (Orbach y Natanson, 1992). Pero muchos de los soldados que habían luchado contra el genocidio en Europa regresaron a enfrentar el racismo en casa. Bill Mabry, que creció en Garfield al este del río, me dijo: "Entre nosotros y Barry Farms, estábamos rodeados por el enemigo. Nosotros luchamos en todo el sureste".

El movimiento por los derechos civiles de Washington, ya en ebullición a partir de una campaña en contra de los linchamientos, lanzó nuevas iniciativas contra el acoso brutal y depredador por parte de la policía bajo el mando del jefe Robert Murray. Bill Mabry recuerda cómo la policía "golpeó a un soldado sin piedad, la sangre brotando por todos lados", después de que le pidiera el premio que había ganado en el circo. Mabry también recuerda la electrocución de su amigo de dieciocho años de edad, y sostiene que esto nunca lo reportó la prensa, en cuyos archivos ha buscado la historia desde entonces. Los activistas de derechos civiles también cuestionaron la segregación de Jim Crow que los relegaba a hospitales que ellos llamaron "mataderos", una absurda limitante laboral que marginaba a los negros a ser empleados en tiendas, guardias de calle en el Departamento de Policía y mensajeros o conserjes en el Gobierno federal o del distrito.

Bill Mabry sostiene:

> El negro promedio trabajaba en el correo. Era el único lugar donde podías conseguir un trabajo decente. El correo era el lugar. De otra manera tenías que trabajar en dos o tres trabajos solo para sobrevivir. Los miembros de nuestro equipo de atletismo de secundaria practicaron corriendo por las escaleras de la escuela. Jugadores de béisbol jugaban en campos como maizales. Si la pelota iba al centro del campo, solía desaparecer en un agujero. Algo tenía que estallar (Comunicación personal).

Para atender estos problemas, los comisionados del distrito elaboraron un plan. En un arranque de poder estatal abusivo, purgaron de negros el núcleo central de Washington, manipularon los códigos de zonificación e incendios, construyeron carreteras y puentes para transportar trabajadores

al congestionado centro de nueve a cinco, saturaron el río Anacostia con almacenes para los pobres y mutilaron el área al este del río. En muchas ciudades, estos proyectos de renovación implicaban la asignación masiva de recursos privados y sociales para reducir los centros urbanos a escombros. Los desarrolladores necesitaban la ayuda del Estado para reclamar los núcleos centrales densamente sobrepoblados y deteriorados. Necesitaban los poderes de condena, expropiación y amortización del Estado para ayudarles a negociar con dueños particulares, persuadir a los rebeldes a ceder sus terrenos, y compactar y demoler terrenos en parcelas lo suficientemente grandes para permitir una reurbanización exitosa del costoso centro de la ciudad (Bartelt, 1993; Hirsch, 1983). El estatus colonial de Washington facilitó este proceso, implantado en gran parte por la legendaria Agencia de Remodelación de Tierra (RLA). La RLA tuvo mucho éxito en el financiamiento de sus proyectos, y los comisionados del distrito otorgaron contratos millonarios a las empresas de demolición y construcción.

En la ciudad capital la situación se complicó aún más por el rol simbólico de recibir turistas que llegaban como peregrinos para vivir la democracia (o el poder). Un tema clásico de Washington —en la sombra del Capitolio— enmascaró e instigó el frenesí de la destrucción y el despojo de viviendas. "¡La Comisaría más perversa!", gritó el *Washington Post* sobre la Comisaría de Policía 2, en el corazón del Cinturón Negro, un gueto donde las prostitutas y los bares asolaban la vida urbana (Roberts, 1952). Los residentes afroamericanos de la ciudad habían sido hacinados por los convenios restrictivos en los barrios del tranvía a un diminuto cinturón negro hacia la Florida Avenue Northwest, al norte del núcleo gubernamental/monumental (Wice, 1997-98).

Los desarrolladores, los comisionados del distrito y el *Washington Post* argumentaron que un jugador mundial como Estados Unidos debía estar consagrado con una hermosa ciudad y que aquellos barrios negros debían ser borrados para que esto fuera posible (Figura 5). La ráfaga de demolición codiciosa, licitaciones y construcción descuidada debió de haber sido vertiginosa. En 1940, la Suitland Parkway congregó las instalaciones militares en Bolling y la base aérea de Andrews, y a la vez separó el Barry Farms que se encontraba en desarrollo de su otra mitad en Hillsdale. Barry

Farms se había conservado casi sin cambios después de la Guerra Civil sin agua potable o sistemas de drenaje y viviendas en mal estado (Fitzpatrick y Goodwin, 1990: 51-55; National Parks Service, 1957; Todd-Browner, 1992; *Washington Daily News*, 1954). Dentro de una década, convergería ahí 17% de la gente reubicada del oeste del río (Thursz, 1966).

La activista comunitaria Theresa Jones describió a Sherri Lawson el desarrollo urbano y la reubicación durante este periodo: "Entraron al suroeste como un toro en una tienda de porcelana. Dijeron a las personas que les encontrarían un nuevo hogar. En ese tiempo existía una ley que estipulaba que no podían meter a más de diez personas en un proyecto de vivienda pública. Cuando construyeron los edificios Frederick Douglass, ¡metieron a tanta gente! No me gusta tener que decirlo, pero ahí se fue el barrio" .

En 1945 los comisionados ordenaron la construcción del Puente Victory, de $4 500 000, para cruzar el río Anacostia, que conectaría la carretera Indianhead de Maryland y facilitaría el viaje desde Bolling Field, la estación aérea de la Marina, el laboratorio de investigación de la Marina, el astillero de la Marina, los cuarteles de la Marina y el Hospital de St. Elizabeth para enfermos mentales. Las asociaciones de ciudadanos blancos en los barrios de Congress Heights y Washington Highlands brindaron por el éxito de veinticinco años de *lobby* para ser tratados como ciudadanos con pleno derecho del distrito. Sin embargo, las celebraciones rápidamente se desvanecieron, mucho antes de que el puente tomara el nombre de Frederick Douglass en 1965, a pesar de la insistencia de los ciudadanos blancos por conmemorar a Samuel Mudd, Stephen Foster, Pierre L'Enfant o Helen Keller (*Washington Post*, 1945).

Los comisionados esperaban que el Suitland Parkway y el puente Victory anclarían una red de carreteras, incluyendo las autopistas Kenilworth y Anacostia, la Interestatal 295, así como las crecientes extensiones de vías céntricas como South Capitol Street y Pennsylvania Avenue para servir a los automóviles que saturan el distrito. En muchas ciudades, las nuevas autopistas urbanas construidas después de la ley de carreteras interestatales de 1956 destruyeron las viviendas y desplazaron a las personas, intensificaron la concentración de la pobreza y el aislamiento de las personas pobres de color (Bartelt, 1993; Hirsch, 1983; Judd, 1999; Mohl, 1993). En Washington, estas autopistas significaron

la demolición de barrios pobres y el aislamiento de los pobres del moderno Capitol Hill, en el oeste, y del río Anacostia, en el este. El músico de *blues* de D.C. Nap Turner me dijo: "La autopista Anacostia se construyó el mismo año que el Muro de Berlín. Significó más o menos lo mismo". Las autopistas separaban el área recreativa del Anacostia para los niños, dejando prácticamente ningún lugar para jugar (D.C. Recreation Department, 1961).

El idealismo temprano de la vivienda pública estadounidense se mostró con perfección en los hermosos Langston Terrace Dwellings, un sitio de terrazas naturales en la orilla occidental del río Anacostia. Inspirado en las viviendas para obreros de Europa, el arquitecto negro Hilyard Robinson construyó este proyecto para veteranos negros, incorporando a su emplazamiento alegres sectores ajardinados ornamentados por un atractivo jardín de juegos, esculturas y mosaicos osados que celebraban la Gran Migración (Weissman y Leiner, 1991). Le siguió una oleada de proyectos menos innovadores. Lincoln Heights, construido durante la Segunda Guerra Mundial para veteranos, se transfirió a la Autoridad de Vivienda del Distrito en 1957. La autoridad también construyó 612 unidades en Arthur Capper, 42 en Parkside Addition, 456 en Greenleaf Gardens, 422 en Kenilworth Courts, 200 en Stodert Terrace, 174 en Syphax Gardens, 118 unidades en Terrace Apartments y 158 en Hopkins Place. En 1958, 183 unidades en Sheridan Terrace, 456 en la "ubicación del suroeste", 422 en Lily Ponds, 142 en P Street SW, 158 en Sheridan Road y 150 en el sustituto del sitio de Florida Avenue. En 1959, la autoridad añadió 422 unidades en Kenilworth Courts, 32 en Greenleaf Addition y 274 en Benning Terrace (District Commisioners, 1961).

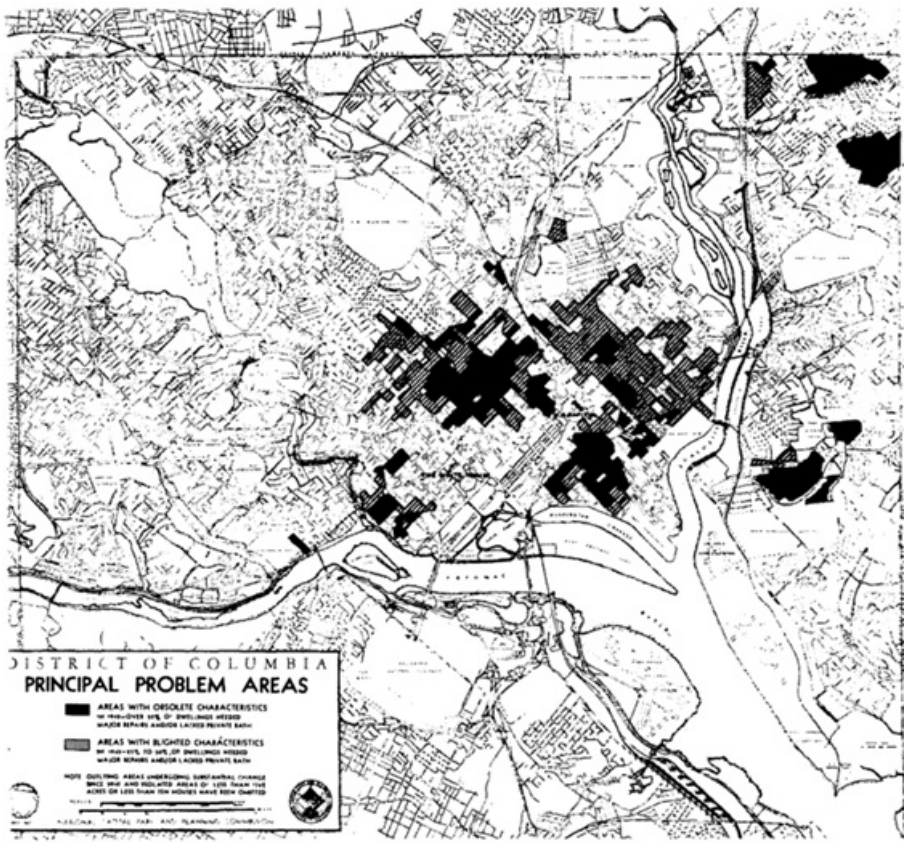
Los cambios en la Comisaría 14 al este del río indican a dónde exactamente tenían que ir las personas. Cuando se formó en 1949 al dividir la antigua Comisaría 11 en dos, el jefe de Policía reportó que el delito más serio fue el robo de ganado (Lewis y Gabbett, 1958). Blancos y negros vivían allí en números más o menos iguales. Entre 1950 y 1958, la población aumentó de manera vertiginosa y añadió 14 000 residentes negros en siete desarrollos de vivienda pública (Lewis y Gabbett, 1958). Es como si alguien aún no hubiera entendido cómo estaban las cosas, los comisionados del distrito establecieron un basurero de quema al aire libre en Kenilworth, justo donde el río Anacostia coincidía con esta comunidad.

En 1960, las autoridades de vivienda informaron de una grave escasez de viviendas, con unas 4 671 personas en las listas de espera. En enero ya se habían ubicado 1 928 de estas familias en casas nuevas en Ainger Place, Kentucky Courts, Highgland Dwellings y Carroll Apartments. Pero con las nuevas solicitudes, el año terminó con una lista de espera de 5 078 más. 1961 fue un año decisivo. Un incendio en los Highland Dwellings donde tres niños pequeños perdieron la vida puso en evidencia la construcción descuidada y deshonesta (District Commisioners, 1961). En 1961, los comisionados empezaron a comprar y convertir edificios de departamentos privados como Valley Green. Rezonificaron los barrios del este del río para acelerar el desarrollo de gran escala para familias numerosas e iniciaron programas de capacitación laboral para madres jóvenes. Construyeron estructuras sobre unas cinco hectáreas: 235 unidades de vivienda en Woodland Terrace, 230 en Eastgate Gardens y cientos más en Frederick Douglass Dwellings, en Stanton Road. Mientras los comisionados del Distrito y sus aliados limpiaron el centro de la ciudad y obtuvieron las últimas ganancias posibles antes de entregar la ciudad al Gobierno local, primero construyeron bantustanes,[6] y luego reductos fronterizos al estilo siberiano, más grandes y más distantes de los servicios y los trabajos, un paisaje falso de horribles monumentos que parecían burlarse del otro lado del río. Al este del río, el desarrollo ocurrió de forma muy rápida y descuidada; abandonando el cuidadoso plan de L'Enfant, se ubicó a las personas al lado de las bases militares, atravesando sus comunidades con carreteras que bloquearon el acceso entre ellas y hacia al río. La activista y residente Diane Dale recuerda: "La rezonificación que asignó [su comunidad en] Fairlawn para unidades multifamiliares, edificios de departamentos únicamente. Amontonaron a la gente. Los edificios eran baratos y de mala calidad, nunca debieron estar allí, los desarrolladores se aprovecharon del mercado". Otro residente describe la actual comunidad de esta manera: "La comunidad está tan separada del río. Cortada, por el puente, la carretera, el helipuerto". Ya para 1970, la población blanca había disminuido de 82 a 6%; la zona había pasado de ser la más rural

6 N de T. Hace referencia a cada uno de los veinte territorios que operaron como reservas tribales de habitantes no blancos en Sudáfrica y África del Sudoeste en el marco de las políticas impuestas durante la época del *apartheid*.

de las ciudades a tener 75% de departamentos; las escuelas funcionaban a 83% de su capacidad.

Figura 5. Principales zonas problemáticas, 1950.



Esta desmovilización ocurrió sin gran lucha (Reed, 1995). Los dirigentes de NAACP señalaron que la renovación urbana en el Distrito de Columbia en realidad era una forma de expulsión urbana y que "el interés por la inversión pretendía establecer un programa de construcción de cuarenta o cincuenta millones de dólares a partir del prejuicio racial" (Landis, 1948; Thomson, 1960) (Figura 6). Los residentes de viviendas públicas protagonizaron una serie de huelgas de renta en 1970-71 (Paige y Reuss, 1983; Paris, 1998).

Theresa Jones dijo:

> Detrás de los campos de juego en el Frederick Douglass Dwellings había un cementerio. Decidieron desarrollar el cementerio, y tuvimos ratas. Organicé un grupo de personas y llevé al alcalde allí. Antes de que el alcalde pudiera llegar, llevaron los equipos de mantenimiento público, y estaban limpiando la zona. Dije: "Oh Señor, por favor déjanos encontrar algunas ratas muertas". Si yo tuviera el valor, iría a cazar algunas. Les indicamos el camino que íbamos a tomar, y alguien dijo: "Tenemos que cambiar esta ruta". Entonces nos pusimos a pensar, y alguien dijo: "No vayamos por allí. Tenemos que ir hacia abajo, por Frederick Place, y luego regresamos por el arroyo". ¿Y qué encontramos? Las ratas se habían congregado allí. El alcalde dijo: "Sé que planearon esto". Y yo le dije: "No, les indicamos la ruta para la visita, y los hombres limpiaron esa ruta" (Clark, 2000).

Las asociaciones de ciudadanos blancos se sentían traicionadas después de años de enviar telegramas y peticiones, y hacer peregrinajes para pedir servicios mínimos como escuelas y bibliotecas (District Public Works Program). Los residentes blancos de Anacostia alarmados (renombrado después de que la Guerra Civil dejó el paisaje estadounidense cubierto de Uniontowns), se oponían a lo que consideraban una invasión cuando adolescentes negros intentaron nadar en la Alberca Fairlawn en Anacostia Park en 1949. Bill Mabry, uno de los nadadores afroamericanos, llamó a ese evento "el primer disturbio racial de Washington" (Gilbert, 1993; Sugrue, 1996). Jugadores en el campo de golf de Fort Dupont se quejaron de que jóvenes ladrones se metieron al campo y guardaban pelotas en sus bolsillos antes de desaparecer entre los árboles (Combes, 1971). En 1949, la Suprema Corte decretó que la ley no podía establecer pactos residenciales restrictivos. Cuando doce jóvenes negros se registraron para asistir a clases en la nueva escuela del barrio Sousa Middle School, los residentes blancos huyeron por las autopistas de huida blanca que habían sido construidas.

Durante la década de los cincuenta, las contradicciones se hicieron contundentes. Washington había emergido como un santuario internacional, y la Suprema Corte se movilizó para anular las leyes Jim Crow, pero la

ciudad estaba llena de población negra privada de sus derechos. La gente pobre rodeaba el núcleo monumental. Comisionados comprometidos con el poder, rehenes de una elite adinerada, y los conservadores del sur en el Congreso presidían una ciudad segregada, a veces brutal. Para apaciguar un vibrante movimiento urbano de derechos civiles y limpiar el núcleo de la ciudad, los comisionados movilizaron el poder del Estado en una reubicación masiva, que también estigmatizó a las personas que habían sido expulsadas. En el proceso, los comisionados crearon una ciudad que serviría al gran Gobierno y a los viajeros suburbanos, pero que no podría funcionar como un hogar donde la gente pudiera vivir y trabajar. El río Anacostia emergió como una barrera literal entre la ciudad de la cultura, la política y la riqueza, y la zona al este del río, cuyos residentes se creían contaminados por los mismos procesos que los habían desplazado.

Nuestra Cortina de Hierro

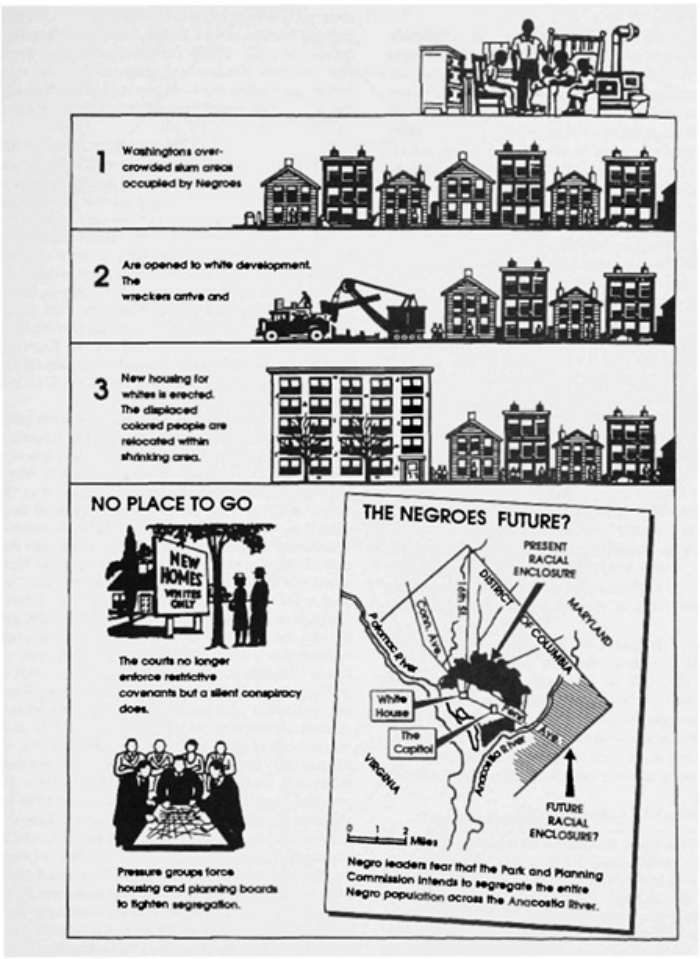
En una ironía predecible, los automóviles ahogan el río Anacostia con aguas subterráneas impregnadas de aceite y grasa que lavan las superficies impermeables de las autopistas, que no logran limpiarlas y filtrarlas como lo haría el suelo. Los gases que emiten envenenan a sus vecinos, que sufren índices alarmantes de plomo en sangre y asma. Aceite usado de motor, llantas y componentes de metal; anticongelantes hechos con plomo, benceno, cadmio, cromo, cobre, mercurio y zinc; baterías de sulfuro y plomo, filtros de aceite y de transmisión; y solventes con asbestos para limpiar frenos y zapatos son desechados en los rellenos locales, reciclados en instalaciones próximas a los arroyos que también contaminan el río o se vierten directamente allí. La mayoría de las personas que viven cerca del río Anacostia no tienen autos, pero sitios contaminantes cercanos —como Fort McNair, Food and Drug Administration, Potomac Electric Power Company, U.S. Capitol Power Plant, U.S. Coast Guard Headquarters, Hess Petroleum y General Services Administration— no los emplean, por lo que el transporte al trabajo es una preocupación constante (African American Environmentalist Association / Friends of the Earth 1998; Alford, 1998; Kronthal, 1998). El desbordamiento de la estación de transferencia de ba-

sura de la ciudad, la escorrentía del patio de mantenimiento del metrobús, desechos militares que recuerdan las ambiciones imperiales del astillero y desechos urbanos componen esta infusión nociva. Sesenta alcantarillas combinadas desembocan en el río Anacostia, y el desbordamiento promedio es de 40 millones de galones o 2 400 millones de galones por año. Las aguas negras municipales supuestamente deben ser tratadas en la planta de Blue Plains, pero, después de una media pulgada de lluvia, la planta descarga el exceso de agua no tratada al río. Cuando se produce un desbordamiento, el agua que corre desde las superficies impermeables se junta con las sustancias que deberían ser encaminadas a la planta de tratamiento de aguas negras. En la lenta corriente del río, el agua sin tratar puede salpicar de un lado a otro por más de un mes. Durante una tormenta en 1998, un ford Escort llegó a borbotones a la superficie del río. De los 2.8 millones de vehículos registrados en la región, 243 000 están registrados en el distrito y unos 800 000 entran cada día (African American Environmentalists Association / Friends of the Earth 1998).

Los monocultivos sofocan las orillas del río, y los derrames de PCB de once desagües clandestinos en el astillero de la Marina contaminan tanto la orilla como el río. El astillero es un sitio Superfund.[7] El halcón peregrino y especies nativas raras como las salamandras manchadas y marmoladas, o el tritón araña rojo, enfrentan la extinción. El agua contiene bajos niveles de oxígeno disuelto y niveles altos de coliformes fecales que producen difteria y disentería. La biodiversidad del fondo ha desaparecido porque todo el sedimento bloquea la luz del sol. Los peces agonizando, que dependen de la visión para atrapar sus presas, no pueden ver dada la ausencia de luz y chocan ciegamente en el fondo del río como aprendices de manejo en un estacionamiento.

7 N de T. Superfund o Acta Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental de 1980 es una ley federal de Estados Unidos diseñada para limpiar sitios contaminados con sustancias peligrosas, así como "contaminantes o contaminantes ampliamente definidos".

Figura 6. Cómo los negros se convierten en desplazados.



Cortesía de Kenesaw Landis, National Committee on Segregation in the Nation's Capital

No obstante, el río Anacostia es inexplicablemente precioso para las personas que viven en sus orillas. Algunas personas entretejen el río en sus propias historias de vida. "Es verano, así que parece correcto estar en Anacostia Park. Te recuerda toda la atmósfera de cuando eras pequeño. También hay gente que pasa, que se traslada; que se entera de la reunión de boca en boca. Llaman a

tu hermano, a tu sobrino, y más gente viene". Recuerdan haber nadado allí cuando la piscina municipal estaba cerraba para los negros, o recuerdan haber vendido bagres a los blancos en la otra orilla. Recuerdan haber vuelto a cruzar el río tras la renovación urbana, o reunirse con familias para hacer picnic "en un lugar natural para refrescarse en Anacostia Park; todo el mundo intentaba conseguir un poco de la brisa del río" . Muchos han pescado allí, de manera obstinada, durante la mayor parte de sus vidas. La gente va al río para hacer el amor o para estar solos. Las madres llevan a sus hijos para tranquilizarlos, y una mujer lleva su bebé recién nacido "para darle una buena perspectiva de la vida". Otra mujer presionaba a su hermana para que celebrara su boda allí mirando directo al río Anacostia" . Una mujer lo visita con frecuencia desde que descubrió que tenía el VIH, y siente que la gente ya no quiere estar con ella. Las personas me han hecho muchos comentarios como: "Algunos días es tan tranquilo que no lo cambiarías por nada" ; "cuando me enojo, cuando necesito un lugar donde pensar, aquí es donde vengo. Vengo para pensar en mis problemas. A veces lloro" ; "él está pensando en su almuerzo" ; "el Anacostia es el único río interior en una ciudad en los Estados Unidos […] Es lo único que da a la comunidad una oportunidad para escapar al ajetreo" . El etnógrafo comunitario y residente en una vivienda pública Jackie Brown dice de Anacostia Park que "este es un parque *principal*" .

Sin embargo, las experiencias y las percepciones del río son más complejas. Muchas de las personas que viven cerca, a pesar de estar a veces desesperados por un espacio verde, no pueden llegar a él o encontrarlo debido a las autopistas que se interponen entre sus comunidades y la costa. Algunas sienten cierta ambivalencia respecto al río debido a su suciedad. "El agua está muy sucia, muy, muy sucia, simplemente no quieres ir allí. A veces hay un olor por todo el sureste, como cadáveres o algo así".

Un residente dijo esto a Michael Kronthal:

> El olor ha aumentado, el sedimento ha crecido y ahora los patos pueden cruzar a pie. Podemos ver hasta dónde ha llegado el sedimento al identificar dónde los patos dejan de caminar y empiezan a nadar. Puedes ver la basura desde la autopista de Pennsylvania Avenue —autos, llantas, todo—. Y cuando baja la marea, puedes ver todas esas llantas en la orilla. Esa es la causa. ¡Y luego están los autos!

> Tienes millones de autos entrando y saliendo cada día. Podemos caminar aquí todos los días y ver la niebla tóxica (en Kronthal, 1998: 35).

Un navegante entusiasta le dijo a Kronthal: "El problema con el río es su suciedad, es necesario limpiarlo […] está contaminado sobre todo debido a los desagües. Las personas tiran cosas como pasto, hojas y tapones de papel en los desagües, y cuando hay una lluvia fuerte se desbordan y salen cerca del puente del ferrocarril y la planta de energía de Benning Road, luego se detienen en el muelle y donde están los barcos, pues hay mucho desecho que ocasiona estancamiento de las aguas residuales allí" (Kronthal, 1998: 10).

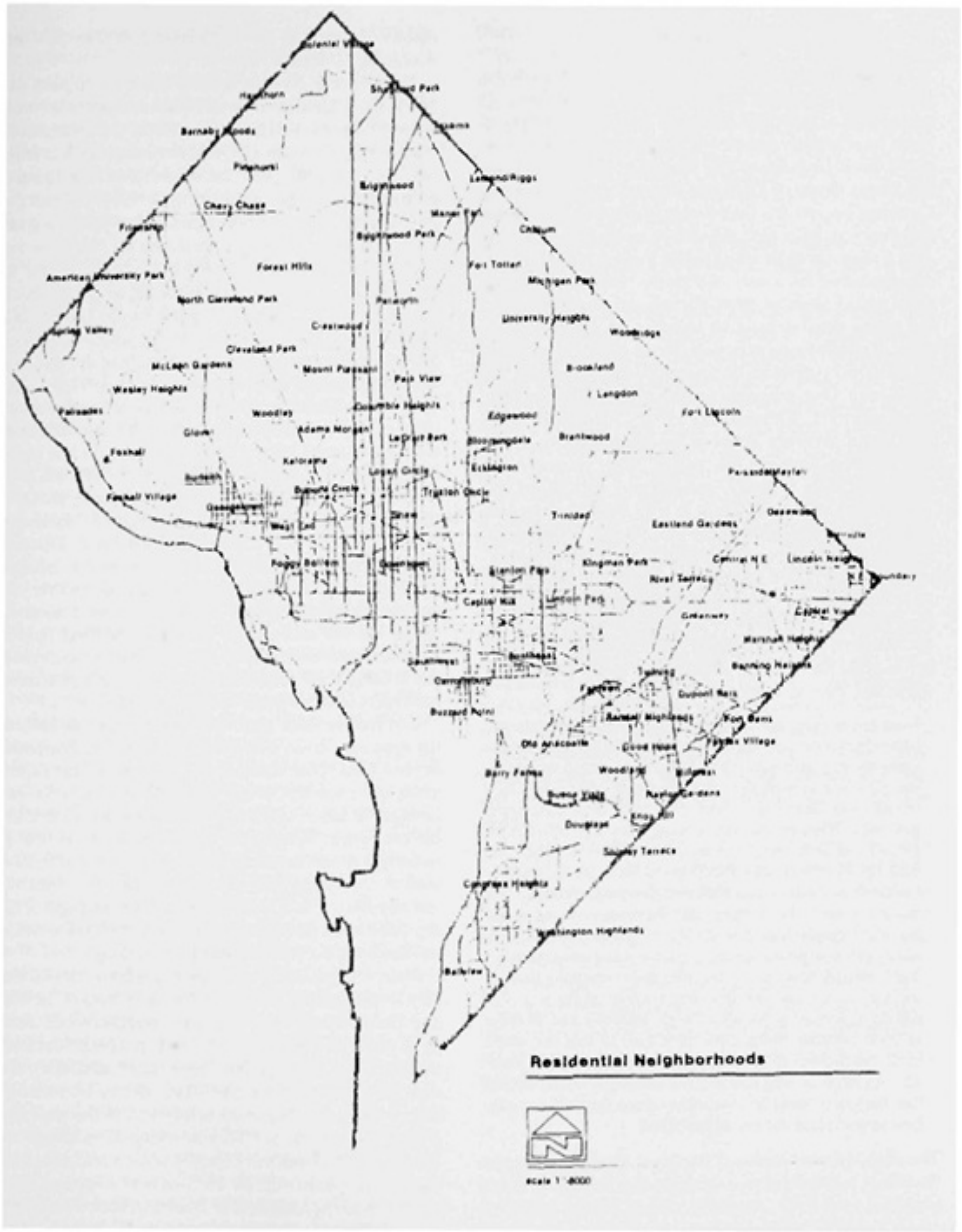
Para mucha gente que vive al este del Anacostia, el río enmarca literalmente el resto de la ciudad y proporciona un marco muy comparativo. Ayuda a la gente a ver y articular la justicia social y económica en términos de "este lado", en relación con la orilla occidental o con el río Potomac, Rock Creek Park, Haines Point, el Fort Circles Park e incluso con el "D.C.". Un alumno de secundaria preguntó a Penn Clark: "Además de una excusa en blanco y negro, ¿por qué está tan sucio el río Anacostia, y el río Potomac tan limpio?" (citado en Williams *et al*., 1997a[8]). Al oeste del río, se establecen comparaciones entre sus vecinos del extremo sur y los de Capitol Hill, en el norte: "Si caminas en Capitol Hill, ellos toman sus carteras, corren y se suben a los taxis. El Congreso no va a cuidar de nosotros. Todo el mundo en D.C. sabe eso" (en Williams *et al*., 1997a).

Desde la renovación urbana, a medida que el río se contaminó cada vez más y los residentes al este se enfrentaban a lo que debería haber sido el problema predecible de buscar trabajo, los extraños los han estereotipado según la ideología nacional de la clase baja. Los mapas de la ciudad a veces excluyen esta área o la etiquetan como "Anacostia" o el "Sureste". La gente en otras partes de la ciudad la ven como "mala", y con frecuencia se nombra a toda el área como "Anacostia", aunque las personas que viven en el área reconocen 27 diferentes barrios con sus nombres (Figura 7). Los visitantes al este del río a menudo hablan al irse de "regresar a D.C.". Los

8 N. de T. Para esta cita específica de *Williams et al.* (1997a) no se encontró la página exacta del texto original. Es una supresión de origen.

libros sobre la historia de la ciudad, sobre la ciudad multicultural e incluso sobre la renovación urbana excluyen esta parte de la ciudad y vuelven a sus residentes, es decir, a las personas de Washington, personas sin una historia (Cary, 1996; Gillette, 1995; Gutheim, 1977; Lewis, 1976; Smith, 1980; 1988; Wolf, 1982). Una breve mirada a la historia de Washington corrobora estas opiniones. Las historias de periodistas, políticos y científicos sociales omiten la renovación urbana e inician o terminan con el autogobierno o el desafortunado gobierno del alcalde Marion Barry. Los pecados de Barry, aunque extraordinarios e irritantes, simplemente no resultaron ser tan ruines como para explicar todos los problemas de la ciudad (Paris, 1998). Estos problemas derivan de la infraestructura inhabitable e inmanejable instalada por los comisionados del distrito. El río Anacostia y la gente que vive al este del río han participado en la historia de la ciudad y resentido las fuerzas globales durante cientos de años. Comprender tanto esa larga conexión como la alteración más reciente del área causada por la renovación urbana aclara muchas de las contradicciones de hoy: la contaminación y la apreciación del río, la enorme presencia física del Estado en barrios desprovistos de empleos y servicios públicos, y la profunda segregación racial que personas externas ignoran o consideran como patológica.

Figura 7. Washington, D.C. Borrador de los índices de 1993. Cortesía de Washington DC. Oficina de Planificación.



El río de la gente

Las maneras en que las personas enmarcan e imaginan los problemas sociales legitiman los recursos e instituciones que movilizan para resolverlos. Una vez más la ideología de la clase baja parece subyacer a los planes de desarrollo del centro de Washington y el río Anacostia. El Washington Financial Control Board, el Board of Trade, la National Capital Planning Commission y el Department of Housing and Urban Development han elaborado juntos un plan que desafía el pasado. Fastidiados por los múltiples problemas de la vivienda pública donde los inquilinos se quejaban de infestaciones de ratas, cucarachas y palomas, inundaciones y duchas hirviendo, montones de basura y reglas caprichosas, la administración de la vivienda pública lanzó un programa ambicioso de modernización del personal y contrató adictos en proceso de rehabilitación como aprendices de construcción con salarios de pasantes, además de la creación de un cuerpo policial propio, la selección de inquilinos y la promoción de la alfabetización (Loeb, 1997; Williams *et al*., 1997b). Animado por la visión de William Julius Wilson sobre comunidades de ingresos mixtos, el Department of Housing and Urban Development reemplazó las 134 unidades de vivienda pública en Ellen Wilson Dwellings, ya abandonadas, con las Capitol Hill Townhomes, que dieron hogar a 33 familias pobres junto con residentes de ingreso medio para brindar estabilidad. Cuando comenzó la demolición, los trabajadores se sorprendieron al encontrar cuatro tanques, cada uno de 4 000 galones, con unos 13 000 galones de líquidos inflamables, un depósito de concreto con grasa y aceite, y los cimientos de tres edificios demolidos en 1970 para la construcción del Southwest Freeway (Haggerty, 1995; Loeb, 1996; Bennet y Read, 1999). Cómo ha vivido allí toda su vida, Theresa Jones no se sorprendió:

> Era una niña. Por la noche podías ver a los hombres llegar a casa del trabajo, y estaban cubiertos de polvo de carbón, ya que los almacenes de gas estaban en la calle M, al lado del puente, y los hombres trabajaban allí excavando el carbón, así se ganaban la vida. Y había unos tanques inmensos de gas. Cuando la gente estaba cocinando, se hundían en el suelo, y luego, cuando la hora pico

> había pasado, se levantaban de nuevo. Después se los desmantelaron, pero como ambientalista, interesada en todas esas cosas, la compañía de gas sellaba toda esa área, aunque ha habido derrames al río. Eso lo descubrimos, y les hicimos la pregunta. El astillero de la Marina ya ha formado un grupo asesor para hacer algo respecto a la contaminación y tienen una orden judicial para hacer algo al respecto. Pero luego descubrieron que tenían que venir hasta acá para atender el asunto de la compañía de gas. Para poder construir algo allí, primero tienen que descubrir dónde están los sistemas. En este lugar estamos en una llanura tormentosa. Los ingenieros vertieron tintes, y donde el tinte burbujeaba, sabían que había algo allí. Realmente tienen que excavar para saber (citada en Clark, 2000[9]).

La Autoridad de Vivienda de D.C. ha cedido los Arthur Capper Dwellings a los marines, explicando que la propiedad no tiene valor y que el Cuerpo de Marines será un factor de estabilidad. Los marines, que juegan beisbol y practican sus ejercicios militares, pueden mejorar la seguridad y servir de modelo para los hombres jóvenes. El ingreso promedio de los anteriores residentes de Arthur Capper y de la urbanización vecina de Carrolsburg es 6 161 dólares (Fehr, 1998).

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital plantea un regreso al paseo junto al río, por medio de avenidas remodeladas, taxis acuáticos, museos y monumentos al lado del río (National Capital Planning Commission, 1995). "Washington, a punto de volver a la miseria", exclama el *Washington Post*, alineándose una vez más con la política de crecimiento (Vogel, 1999). Las autoridades planean el renacimiento del astillero naval, al ampliar su fuerza de trabajo a 11 000 personas, incluyendo el Navy Sea Systems Command, el Navy's Judge Advocate General, el Naval Facilities Engineering Command y los empleados de un centro de compras de millones de dólares para la flota de combate de Estados Unidos. "La capital del poder mundial y a la vez Mount Trashmore", comentó un residente acerca de la nueva ubicación (Fehr y Montgomery, 2000; Loeb, 1998: B1, B8). El Plan Maestro de la ciudad propone que los empleados trasladados

9 N. de T. Para esta cita específica de "Clark, 2000" no se encontró la página exacta del texto original. Es una supresión de origen.

puedan incentivar nuevos desarrollos, pero no estarán más dispuestos que la mayoría de los residentes de los suburbios a tomar el transporte público para ir al trabajo. El plan anticipa unos 56 000 nuevos viajeros llegando por automóviles privados y camionetas, 18 000 de ellos viajando solos, y recomienda una nueva conexión de las autopistas entre los puentes de South Capitol y Frederick Douglass. Al este del río, el Metro espera construir un amplio estacionamiento en un pequeño humedal indígena, y el Gobierno de la ciudad planea también una cárcel y un albergue en el otro humedal que queda río arriba. Los residentes que viven cerca de la nueva parada del metro murmuran sobre las infracciones al código de vivienda que han empezado a recibir, presagio de desplazamiento y gentrificación.

Las personas de ambas orillas del río Anacostia enfrentan estos planes, y lo hacen con muy poco poder más allá del que le otorgan sus vidas vinculadas al río. Sus experiencias y memorias del pasado influyen en la manera cómo imaginan el futuro. Una residente de toda la vida de Anacostia, Ruth Ellerbee, comenta: "Anacostia es una pequeña ciudad en sí misma. Desafortunadamente es también el lugar que el poder ha utilizado como su basurero. Es aquí donde se meten los centros de rehabilitación y otras cosas que otros sectores de la ciudad no quieren. Ahora parece que se presta mucha atención a Anacostia, pero siempre hemos estado aquí".

Muchos residentes están aún más enfadados, y, debido al pasado que recuerdan, sus temores de que el astillero o los cuarteles de la Marina invadan sus barrios tienen bastante sentido. Imaginan un gran barrido, un plan maestro para demoler Arthur Capper y Carrollsburg y trasladar a la gente más hacia el sureste. Sus visiones están arraigadas en la historia, pues eso ya ocurrió antes, y en la realidad de la política de crecimiento actual. "Están intentando eliminarnos. Trabajando en McDonald's o Popeye's no ganas suficiente para alimentar a tres hijos. Nos exigen trabajar por cinco dólares la hora y durante diez horas cada día", dijo un residente de la vivienda pública a Susie McFadden (citado en Williams *et al*., 1997b). Otra persona me dijo: "Construyen una sección, demuelen o desaparecen otra, y aún hay más. Habrá protestas durante un rato, pero siempre nos quitan nuestros lugares, y hacen falsas promesas. Nos meterán en lugares

como Congress Park y Valley Avenue, lugares en alerta roja debido a los altos índices de criminalidad".

En los barrios cerca del río Anacostia, los activistas han organizado proyectos de justicia ambiental. Aunque el Seafarers Yacht Club inició como un club para deportistas náuticos, ahora las mujeres pueden ser capitanes, y el club se ha ido orientado cada vez más hacia el servicio comunitario. La historia oficial del Club afirma:

> Los marinos tienen un fuerte compromiso con la seguridad de navegación y los servicios comunitarios. Encuentran constantemente formas de compartir con otros los placeres que cosechan a la orilla del río Anacostia y las aguas circundantes. Miembros del club (los capitanes) han dedicado su tiempo y sus embarcaciones a diversos actos de caridad y comunitarios. Uno de los eventos, la Limpieza Anual del Seafarers Yacht Club, se ha transformado en el Día de Limpieza del Río Anacostia (Seafarers Yacht Club, s.d.).

Durante los últimos quince años, bajo el liderazgo de Howard Gassaway y Billy Cobb, los miembros del Club han organizado jornadas de limpieza y han podido remover unas quince toneladas de basura del río (véase www.anacostiaws.org). Mientras moviliza recursos de la ciudad y voluntarios, Gassaway siempre aclara que en realidad están haciendo el trabajo del Gobierno. En una reunión de planeación, por ejemplo, bromeó con un empleado de obra pública: "Dile al [alcalde] Tony Williams que estamos limpiando su río". Junto con su coorganizador, la Anacostia Watershed Society, que también patrocina viajes en kayak, proyectos científicos, concursos de poesía y jardines comunitarios, además que monitorea sin cesar los puntos de origen de la contaminación, el Club ha movilizado muchos voluntarios en ese esfuerzo.

Frazier Walton, presidente de la Kingman Park Civic Association al oeste del río, ha demandado varias veces a la ciudad, al astillero naval y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por haber contaminado el río con PCB y por violar el Acta de Agua Limpia. Los residentes de Kingman Park y River Terrace se opusieron a la construcción del estadio RFK y la autopista Barney Circle donde la avenida Pennsylvania atraviesa el río,

y se organizaron para impedir a la ciudad construir un parque temático en la isla Kingman, que se encuentra en medio del río, entre sus comunidades. El activista de River Terrace, George Gurley, ha desarrollado una larga campaña para medir las emisiones que salen de Pepco, en la frontera oriental de la comunidad, y documentar los problemas de salud que esas emisiones agravan junto con las emisiones de los automóviles que cruzan el Puente Whitney Young. Recientemente, jóvenes voluntarios han reintroducido el águila calva —una especie que había abandonado la ciudad capital durante la Segunda Guerra Mundial— a la orilla occidental de Anacostia. Frieda Murray, Diane Dale y otros miembros del Club de Jardinería Anacostia empezaron a plantar jardines comunitarios en espacios públicos. Con el paso del tiempo, se han opuesto a muchos proyectos grandes de construcción, y en este momento están trabajando para proteger el último humedal indígena de la ciudad de un nuevo estacionamiento. Diane Dale, una residente de cuarta generación adopta una perspectiva de largo plazo: "Hablan de sustentabilidad pública y de crecimiento inteligente; la mayoría de los barrios quieren ser sustentables. Bien, nosotros éramos de los más sustentables que había; había médicos, trabajadores de limpieza, dentistas, todos estaban aquí, un mercado a la orilla del río, Woolworths, teatros, iglesias, abarrotes, escuelas cercanas. Y nunca nos fuimos". Dale ayudó a traer activistas de todas partes a una Cumbre Ambiental en la primavera de 2000, a fin de coordinar sus esfuerzos frente a una serie de proyectos grandes de desarrollo. Explica que los activistas llevan años limpiando el río para que los desarrolladores puedan volver a arruinarlo.

En Washington, la justicia ambiental se trata de los valores de uso. El movimiento está radicalmente en contra de la política de crecimiento hegemónica en Washington. Las acciones de las personas emergen de los procesos sociales y ecológicos inciertos, injustos y contradictorios impulsados por ideologías nacionalistas que inspiraron un entorno, un imperio militar y una ciudad capital, y por proyectos capitalistas, empezando con los sombreros de castor y el tabaco, alimentados por los valores de cambio. Los ríos ejemplifican el conflicto entre los valores de uso y los valores de cambio como preciadas piezas de la naturaleza, donde la gente pesca, navega, reflexiona y se reúne, y como líneas de vida comerciales y

militares o barreras políticas en el pasado. Hoy, el río Anacostia encarna el valor inmobiliario, ya que Washington, como muchas ciudades, parece condenada a celebrar el consumo y el turismo junto a un aparato estatal duradero, pero cada vez más pequeño (con la excepción de los proyectos de construcción de cárceles). Las tasas de encarcelamiento que han desfigurado los barrios a lo largo del río pueden anunciar una nueva era inestable, injusta y contradictoria para población pobre sin lugar e inocente, desplazada por el actual régimen de política de crecimiento y las políticas de desplazamiento impulsadas con los programas de vivienda pública y el nuevo plan del paseo junto al río.

Una ecología política que explora a lo largo del tiempo las conexiones y contradicciones entre los procesos naturales y sociales puede iluminar los problemas de pobreza y segregación en muchas ciudades. En Washington, las causas de formación del Estado han complicado estas conexiones. El río Anacostia ha atraído a residentes a sus orillas para ganarse la vida, refrescarse, convivir con amigos y familia, observar aves, pescar, construir botes y buscar un poco de paz. Pero el río también ha inspirado a comerciantes de pieles, a los forjadores de la nación y desarrolladores que buscan utilizarlo para objetivos mayores. Ellos lo han despojado, y en ocasiones el río ha frustrado sus planes.

Reconocimientos

Estoy agradecido por las ideas y los consejos de Bob Williams, Elizabeth Sheehan, Jenell Paris, Elizabeth Alford, Joe Dent, Katrina Greene, Sherri Lawson Clark, Marianna Blagburn, Penn Clark, Kenneth Pitt, Susie McFadden-Resper, Stephen Loring, Joan Gero, Regina Harrison, Tanya Ramos, Jackie Brown, Malia Neff, Edda Ertunca, Jim Connelly, Renee Boffa, Zoe McHugh, Ken Kusmer, Micaela di Leonardo, Courtney Leborious, Theresa Trainor, Stephen Syphax, Carl Cole, Diane Dale, Atiba Madyeun, Diane Bacote, Frazier Walton, Billy Cobb, Howard Gassaway, Robert Boone, Bob Martin, Roger Legerwood, Jeff Maskovsky, Susan Hyatt, Judy Goode, Bill Leap, Damian Thompson, y Michael Kronthal.

David Lewis escribe:

> Lo que el general [general Grant, presidente de la Comisión Nacional de Parques y Planificación del Capital y autor del plan maestro para la renovación urbana] quería era una ciudad ordenada, sin votos de edificios de gobierno en mármol, empresas exitosas y los tugurios demolidos para dejar lugar a viviendas de clase media. Grant explicó que, ya que la población afroamericana estaba desprovista de "parques infantiles, edificios públicos, parques y escuelas," debería ser reubicada en la parte de atrás de Anacostia, donde tendría sus propias facilidades. De la misma manera que en las ciudades de Sudáfrica actual, Washington tendría su población blanca viviendo en, o cerca de, el centro concurrido. Los no blancos llegarían al centro cada día para los empleos serviles desde los asentamientos periféricos (Lewis. 1980: 30).

Referencias[10]

Abbott, C. 1999. *Political terrain*. University of North Carolina Press.

African American Environmentalist Association / Friends of the Earth. 1998. *Our unfair share: pollution in Washington, D.C.*

Alford, E. 1998. *The Anacostia river* [tesis Senior Honor, Department of Anthropology, American University].

Alley, K., C. Faupel y C. Bailey. 1995. The historical transformation of a grassroots environmental group. *Human Organization*, *54*, 410-416.

Amsler, S. 1997. Washington in the mid-century. *Washington History*, *9* (otoño-invierno), 42 -51, 92.

Atkinson, A. 1991. *Principles of political ecology*. Belhaven Press.

10 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Barker, H. 2000. *Collisions of history and language: nuclear weapons testing, human environmental rights abuses, and coverup in the Republic of the Marshall Islands* [tesis de doctorado, Department of Anthropology, American University].

Barnes, S. 1947. River claims child victim. *Pittsburgh Courier*, 17 de mayo, 1.

Bartelt, D. 1993. Housing the underclass" En M. Katz (ed.). *The "underclass" debate: views from history* (118-157). Princeton University Press.

Barthold, E. 1993. The predicament of the "parklets". *Washington History* (primavera/verano), 29 -45, 91.

Bennett, L. y A. Reed. 1999. The new face of urban renewal: the near north redevelopment initiative and the Cabrini-Green neighborhood. En A. Reed (coord.). *Without justice for all* (175-211). Westview Press.

Bennett, M. 1999. Manufacturing the ghetto: anti-urbanism and the spatialization of race. En M. Bennet y D. Teague (coords.). *The nature of cities* (pp. 169-190). University of Arizona Press.

Biersack, A. 1999. Introduction: from the "new ecology" to the new ecologies. *American Anthropologist*, *101*(1), 1-18.

Brosius, P. 1999a. Engagements with environmentalism. *Current Anthropology*, *40*(3), 278-288.

Brosius, P. 1999b. Green dots, pink hearts: displacing politics from the Malaysian rain forest. *American Anthropologist*, *101*, 36-57.

Bryant, B. y P. Mohai. 1992. *Race and the incidence of environmental hazards*. Westview Press.

Bryant, R. L. 1992. Political ecology: an emerging research agenda in third-world studies. *Political Geography*, *11*, 12-26

Bullard, R. 1990. *Dumping in Dixie*. Westview Press.

Bullard, R. 1993. *Confronting environmental racism: voices from the grassroots*. South End Press.

Bullard, R. 1994. *Unequal protection*. Sierra Club Books.

Čapek, S. M. 1993. The "environmental justice" frame: a conceptual discussion and an application. *Social Problems*, *40*, 5-24.

Carroll, G. 1998. When pollution hits home. *National Wildlife*, *29*, 30- 39.

Cary, F. C. 1996. *Urban odyssey: a multicultural history of Washington, D.C.* Smithsonian Institution Press.

Clark, S. L. 2000. *Interview with Theresa Jones. Tape recording.* Smithsonian, Folklife Programs Archive.

Cohen, B. y J. O'Connor. 1990. *Fighting toxics*. Island Press

Combes, A. 1971. Fort Dupont Park to close golf links. *Washington Post*, 23 de noviembre.

Cox, K. 1998. Spaces of dependence, spaces of engagement and the politics of scale, or: looking for local politics. *Political Geography*, *17*, 11-21.

Cronon, W. 1991. *Nature's metropolis*. W. W. Norton.

Davis, M. 1998. *Ecology of fear*. Metropolitan Books.

Di Chiro, G. 1995. Nature as community: the convergence of environment and social justice. En W. Cronon (coord.). *Uncommon ground* (298-320). W. W. Norton.

Dickens, P. 1996. *Reconstructing nature: alienation, emancipation and the division of labor.* Routledge.

District Commissioners. 1961. *Minutes of meeting March 8. District public works program library construction program*. Archivo 5-012C. National Archives.

Fehr, S. C. 1998. D.C. wants marines to take site of failed SE Complex. *Washington Post*, 7 de noviembre, B1, B7.

Fehr, S. C. y D. Montgomery. 2000. Sea change seen on waterfront. *Washington Post*, 8 de junio, 1, 5.

Fentiman, A. 1996. The anthropology of oil: the impact of the oil industry on a fishing community in the Niger delta. *Social Justice*, *23*, 87-99.

Fitzpatrick, S. y M. Goodwin. 1990. *The guide to black Washington*. Hippocrine Books

Fleet, H. 1876. A brief journal of a voyage made in the bark Virginia, to Virginia and other parts of the continent of America. En E. D. Neill (coord.). *The founders of Maryland as portrayed in manuscripts, provincial records and early documents* (19-37). Joel Munsell.

Gardner, W. N. 1996. Native Americans: early encounters. En F. Curro Cary (coord.). *Urban odyssey* (3-19). Smithsonian Institution Press.

Gilbert, B. W. 1993. Toward a color-blind newspaper: race relations and the *Washington Post*. *Washington History* (otoño-invierno), 5-27, 99.

Gillette, H. 1995. *Between justice and beauty: race, planning, and the failure of urban policy in Washington*, *D.C.* Johns Hopkins University Press.

Goldman, B. y L. Fitton. 1997. *Toxic waste and race revisited*. Washington Center for Policy Alternatives NAACP / United Church of Christ Commission for Racial Justice.

Greenberg, J. B. y T. K. Park. 1994. Political ecology. *Journal of Political Ecology*, *1*, 1-12.

Grinde, D. y B. Johansen. 1995. *Ecocide of native America*. Clear Light Publishers.

Grossman, J. 1990. *Land of hope: Chicago, black southerners, and the great migration*. University of Chicago Press.

Gutheim, F. 1977. *Worthy of the nation*. Smithsonian Institution Press.

Haggerty, M. 1995. Public housing renewal plan strikes a nerve: opposition strong to blueprint for rebuilding D.C. Complex. *Washington Post*, 23 de septiembre, E1, E10-E11.

Harvey, D. 1996. *Justice, nature and the geography of difference*. Blackwell.

Harvey, D. 1998. What's green and makes the environment go round? En F. Jameson y M. Miyoshi (coords.). *The cultures of globalization* (327–355). Duke University Press.

Heyman, J. McC. 1994. The Mexico-United States border in anthropology. *Journal of Political Ecology*, *1*, 43-64.

Hirsch, A. 1983. *Making the second ghetto*. Cambridge.

Hirsch, A. y R. Mohl. 1993. *Urban policy in twentieth century America*. Rutgers University Press.

Humphrey, R. y M. E. Chambers. 1977. *Ancient Washington: American Indian cultures of the Potomac valley*. GW Washington Studies, 6. George Washington University Press.

Hutchinson, L. 1977. The Anacostia story. *Smithsonian Institution Press*, 75-97.

Johnston, B. R. (ed.). 1994. *Who pays the Price?* Island Press.

Johnston, B. R. 1997. *Life and death matters: human rights and the environment at the end of the millennium*. Alta Mira Press.

Judd, D. 1999. Why African Americans got so little from the democrats. En A. Reed (coord.). *Without justice for all* (123-150). Westview Press.

Koester, S. 1987. A close encounter of the third world: west Indian fishermen and supertankers. *Cultural Survival Quarterly*, *11*, 26-30

Kothari, S. y P. Parajuli. 1993. No nature without social justice: a plea for cultural and ecological pluralism in India. En W. Sachs (ed.). *Global ecology* (224–239). Zed Books

Kronthal, M. 1998. *Local residents, the Anacostia river, and "community"*. Environmental Protection Agency.

Kusmer, K. 1976. *A ghetto takes shape*. University of Illinois Press

Kusmer, K. 1995. African Americans in the city since World War II: From the industrial to the post-industrial era. *Journal of Urban History, 21*(4), 458–504.

Kusmer, K. 1997. Ghettos real and imagined: A historical comment on Loic Waquant's "Three pernicious premises in the study of the

American ghetto". *International Journal of Urban and Regional Research*, *20*, 706-710.

Landis, K. 1948. *Segregation in Washington. A report of the National Committee on Segregation in the nation's capital*. University of Chicago Press.

Legerton, R. y M. Legerton. 1990. Economic slavery or hazardous wastes? Robeson County's economic menu. En J. Gaventa, B. E. Smith y A. W. Willingham (coords.). *Communities in economic crisis*: *Appalachia and the South* (146-157). Temple University Press.

Levine, A. 1982. *Love canal: science, politics, and people*. Lexington Books.

Lewis, A. y H. Gabbett. 1958. Juveniles harass "baby" precinct. *Washington Post*.

Lewis, D. L. 1976. *District of Columbia: a bicentennial history.* Norton.

Lipietz, A. 1995. *Green hopes: the future of political ecology*. Polity Press.

Loeb, V. 1996. The past is demolished at Ellen Wilson dwellings. *Washington Post*, 25 de julio, J1.

Loeb, V. 1996. Currents of change. *Washington Post*, 1 de diciembre, B01

Loeb, V. 1997. Public housing proposal would bar criminals. *Washington Post*, B1, B8.

Loeb, Vernon. 1998. "Seeking a Better View on the D.C. Waterfront." *Washington Post*, March 8: B1, B8.

Logan, J. y H. Molotch. 1987. *Urban fortunes: the political economy of place*. University of California.

Logan, J. R. Bridges Whaley y K. Crowder. 1997. The character and consequences of growth regimes. *Urban Affairs Review*, *32*, 603-630.

Marcuse, P. 1997. The enclave, the citadel, and the ghetto. *Urban Affairs Review*, *33*, 228-264.

Miller, V. 1995. The environment and human rights in West Harlem. En B. Bradford y M. Gwy (coords.). *Down to Earth* (123-128). Kumarian Press.

Miller-Travis, V. 2000. Social transformation through environmental justice. En D. Hessel y R. R. Ruether (coords.). *Christianity and ecology: seeking the well being of Earth and humans* (559-572). Harvard University Press.

Milton, K. 1996. *Environmentalism and cultural theory*. Routledge

Mohl, R. 1993. Race and space in the modern city: Interstate-95 and the black community in Miami. En A. Hirsch y R. Mohl (coords.). *Urban policy in twentieth century America* (101-158). Rutgers University Press.

National Capital Planning Commission. 1996. *Extending the legacy.*

National Parks Service. 1957. *National capital parks.*

Neill, E. D. 1876. *The founders of Maryland*. Joel Munsell.

Orbach, B. y N. Natanson. 1992. The mirror image: black Washington in World War II era federal photography. *Washington History*, *3*, 5-93.

Paige, J. S. y M. M. Reuss. 1983. Safe, decent and affordable: citizen struggles to improve housing in the District of Columbia, 1890-1982. *Studies in D.C. History and Public Policy Paper*, *6.* University of the District of Columbia

Painter, M. y W. Durham (eds.). 1995. Introduction to social causes of environmental destruction in Latin America (1-21). University Michigan Press.

Paris, J. W. 1998. *African-American women's activism and ghetto formation in Washington, D.C. neighborhood* [tesis de doctorado, Department of Anthropology, American University].

Peet, R. y M. Watts. 1996. *Liberation ecologies*. Routledge

Pena, D. (ed.). 1998. *Chicano culture, ecology, politics: subversive kin*. University of Arizona

Pulido, L. 1996. *Environmentalism and economic justice: two Chicano struggles in the Southwest*. University of Arizona Press.

Reed, A. 1995. Sources of demobilization in the new black political regime: incorporation, ideological capitulation, and radical failure in the post-Segregation era. En M. P. Smith y J. Feagin (coords.). *The bubbling cauldron* (182-208). University of Minnesota Press.

Roberts, C. 1952. Poor health a terrible consequence of blighted areas in district. *Washington Post*, 29 de enero, 1B.

Schwab, J. 1994. *Deeper shades of green: the rise of blue collar and minority environmentalism in America*. Sierra Club Books.

Seafarers Yacht Club. S.f. *Club history 1945-2000*.

Sheridan, T. 1995. Arizona: the political ecology of a desert state. *Journal of Political Ecology*, *2*, 41-57.

Skowronek, S. 1982. *Building a new American state: the expansion of national administrative capacities, 1877-1920*. Cambridge University Press.

Smith, K. S. (ed.). 1980. *A history of the District of Columbia*. Associates for Renewal in Education.

Smith, K. S. (ed.). 1988. *Washington at home*. Northridge.

Steinberg, P. y G. E. Clark. 1999. Troubled water? Acquiescence, conflict, and the politics of place in watershed management. *Political Geography*, *18*, 477-508.

Sugrue, T. 1996. *The origins of the urban crisis*. Princeton University Press.

Szasz, A. 1994. *Ecopopuli sm: toxic waste and the movement for environmental justice*. University of Minnesota Press.

Terrell, M. C. 1968. *A colored woman in a white world*. National Association of Colored Women's Clubs. [Original de 1940].

Thomson, F., Jr. 1960. *Letter to colonel Frederick J. Clark, acting president, Board of Commissioners*. D.C. 6 de septiembre. National Archives.

Thursz, D. 1966. *Where are they now?* Health and Welfare Council.

Todd-Browner, C. 1992. Bumpin pride in Barry Farms. *Washington Afro-American*, *18*.

United Church of Christ. 1987. *Toxic wastes and race in the United States*. Commission for Racial Justice.

Vasquez-Leon, M. 1999. Neoliberalism, environmentalism, and scientific knowledge: redefining use rights in the Gulf of California fisheries. En J. McC Heyman (coord.). *States and illegal practices* (233-260). Oxford University Press.

Vogel, S. 1999. D.C. Navy yard poised for rebirth. *Washington Post*, 19 de junio, B1, B4.

Washington Daily News. 1954. Bad timing. 17 de junio.

Washington Post. 1945. $4,500,000 Anacostia span. 6 de agosto.

Washington Sunday Star. 1926. Anacostia hats reclamation now is about half completed. 1∞ de agosto 15.

Weissman, B. y G. Leiner. 1991. *Home: the Langston Terrace dwellings: a study guide for viewers*. Humanities Council of Washington, D.C

Wice, P. 1997-98. Safe haven: a memoir of playground basketball and segregation. *Washington History* (otoño-invierno), 55-71, 94

Williams, B., M. Blagburn, M. Crowley, K. Greene, S. Lawson Clark, S. McFadden y S. Wise. 1997a. *Monitoring Hope VI sites*. Ellen Wilson Dwellings Journal of Research.

Williams, B., T. Ramos, J. Brown, P. Clark, M. Crowley, B. Daugherty, L. Kinney, S. Lawson Clark, S. McFadden, P. Pierce, K. Pitt y T. Washington. 1997b. *Park users and park neighbors*. National Park Service

Williams, R. 1999. Environmental injustice in America and its politics of scale. *Political Geography*, *18*, 49-73.

Wolf, E. 1982. *Europe and the people without history*. University of California Press.

Young, J. S. 1966. *The Washington community, 1800-1828*. Columbia University Press.

20. Repensando el racismo ambiental: el privilegio blanco y el desarrollo urbano en el sur de California*[1]

Laura Pulido

Resumen: Los estudios geográficos sobre el racismo ambiental se han enfocado en las relaciones espaciales entre los riesgos ambientales y la demografía de las comunidades para determinar si existe inequidad. Sin embargo, la discusión sustantiva en torno al racismo está prácticamente ausente en la literatura. El presente trabajo pretende subsanar esta deficiencia de dos maneras. Primero investigo cómo se entiende y se expone el racismo en la literatura. Planteo que, aunque el racismo rara vez se discute de forma explícita, una conceptualización normativa de racismo sustenta las investigaciones. Esta conceptualización predominante resulta no solo demasiado estrecha y restrictiva, sino que también niega la espacialidad del racismo. De esta forma, mi segundo objetivo es demostrar cómo las diferentes expresiones de racismo contribuyen al racismo ambiental. Además de las comprensiones convencionales del racismo, pongo énfasis en el privilegio blanco, una forma altamente estructurada y espacializada de racismo. Utilizando Los Ángeles como estudio de caso, examino la manera en que los blancos han asegurado para sí mismos ambientes relativamente más limpios al mudarse de los centros industrializados en un proceso de suburbanización. Sugiero que los procesos históricos de suburbanización y descentralización ejemplifican el privilegio blanco y han contribuido a producir los patrones contemporáneos de racismo ambiental. Así, además

1 Publicado originalmente en: Laura Pulido, 2000, "Rethinking environmental racism: white privilege and urban development in Southern California", *Annals of the Association of American Geographers*, 90, 12-40.

*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original de la autora. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen, también se advierte al lector que hay inconsistencias de fechas en algunas citas y su referencia correspondiente.

de interpretar el racismo como la localización discriminatoria de infraestructura y la intención dañina, también examino una forma de racismo menos consciente pero hegemónica: el privilegio blanco. Un enfoque de este tipo no solo nos permite apreciar la variedad de formas de racismo que moldean el paisaje urbano, sino que también aclara las relaciones funcionales entre sitios —en particular, zonas industriales y suburbios residenciales—, y cómo su desarrollo refleja y reproduce una formación racista particular.

Palabras clave: racismo ambiental, Los Ángeles, privilegio blanco, suburbanización.

El concepto de racismo ambiental —la idea de que los no blancos están mayormente expuestos a la contaminación— surgió hace más de diez años con el estudio de la United Church of Christ, "Toxic waste and race in the United States" (1987). Dadas las implicaciones sociales, ecológicas y para la salud de los riesgos ambientales, los geógrafos han explorado el racismo ambiental para contribuir a la elaboración de mejores políticas. Los estudios han procurado saber si existen inequidades, las razones que subyacen a esas disparidades y, al mismo tiempo, hacer recomendaciones (Cutter, 1995). Aunque estas son sin duda contribuciones importantes de la investigación, el estudio del racismo ambiental también es relevante por una razón adicional: nos ayuda a comprender el racismo.

A pesar de que el estudio de la inequidad racial no es nuevo para los geógrafos (Gilmore, 1998; Woods, 1998; Jackson y Penrose, 1994; Kobayashi y Peake, 1994; S. Smith, 1993; K. Anderson, 1987), el racismo ambiental nos ofrece nuevas comprensiones del tema, en particular de su espacialidad. Desafortunadamente, aquellos que investigan el racismo ambiental no han problematizado seriamente el racismo, optando más bien por una conceptualización de facto, centrada en actos individuales y malintencionados. Existen varios problemas con este enfoque. En primer lugar, al reducir el racismo a un acto hostil y discriminatorio, muchos investigadores, con la notable excepción de Bullard (1990), omiten el rol de las formas estructurales y hegemónicas de racismo en estas inequidades.

De hecho, en otras áreas sustantivas de investigación social, el racismo estructural ha sido el eje dominante de análisis, como la segregación residencial (Massey y Denton, 1993) y los patrones de empleo (Kirschenman y Neckerman, 1991), desde por lo menos la publicación del libro *An American dilemma*, de Myrdal (1944). Pero no es solo que la literatura sobre el racismo ambiental se haya distanciado de las discusiones de las ciencias sociales sobre la raza, sino que, en el caso de la investigación urbana, se ha divorciado de la geografía urbana contemporánea. Una preocupación adicional es que el racismo no se conceptualiza como el proceso socioespacial dinámico que en realidad es. Ya que el racismo es comprendido como un acto discreto que *puede* expresarse en el espacio, no se percibe como una relación socioespacial constitutiva de la ciudad y a la vez producida por ella. Como resultado, no se comprende la espacialidad del racismo, en específico la relación *entre lugares.* Sin embargo, las concentraciones de contaminación son inevitablemente producto de las relaciones entre lugares distintos, incluyendo las zonas industriales, los suburbios acomodados, los suburbios de la clase trabajadora y las áreas céntricas, todos ellos racializados. Un último problema con una comprensión estrecha del racismo es que limita los posibles reclamos, lo que contribuye a reproducir un orden social racista. Al definir el racismo de manera tan limitada, las inequidades raciales que no pueden atribuirse de forma directa a un acto discriminatorio hostil no se reconocen como tal, sino quizá como evidencia de deficiencias individuales o de ciertas decisiones. Si queremos crear una sociedad más justa, debemos reconocer la extensión y profundidad del racismo.

En este trabajo investigo cómo el racismo se conceptualiza en la literatura del racismo ambiental. Utilizando Los Ángeles como un estudio de caso (Figura 1), aplico un concepto alternativo de racismo, el privilegio blanco, junto con otras comprensiones más comunes de la discriminación, para explicar los patrones ambientales disímiles. Identifico tres temas específicos que contribuyen a una conceptualización estrecha del racismo: primero, hago hincapié en la ubicación de infraestructura específica; segundo, en el rol de la intencionalidad, y tercero, en el enfoque poco crítico con respecto a la escala. Típicamente, un estudio puede reconocer la inequidad

ambiental si los no blancos están expuestos de manera desproporcionada a la contaminación, pero solo se concede que existe el racismo ambiental si se puede comprobar una intención malintencionada de parte de aquellos que toman las decisiones.[2] Argumento que el énfasis en la ubicación, que obviamente es importante, debe situarse en procesos urbanos más amplios, y eso exige "saltar escalas" en nuestro análisis (N. Smith, 1993). Esto resulta en especial cierto si se considera que investigaciones recientes señalan que las concentraciones de contaminación están estrechamente asociadas con el uso industrial del suelo (Baden y Corsey, 1997; Boer *et al*., 1997; Pulido *et al*., 1996; Anderton *et al*., 1994b; Colten, 1986). Esta investigación replantea los temas de la intencionalidad y la escala, pues nos llama a examinar la producción de las zonas industriales, su relación con otras partes de la metrópolis y la naturaleza potencialmente racista de los procesos por medio de los cuales se desarrollaron estos patrones.

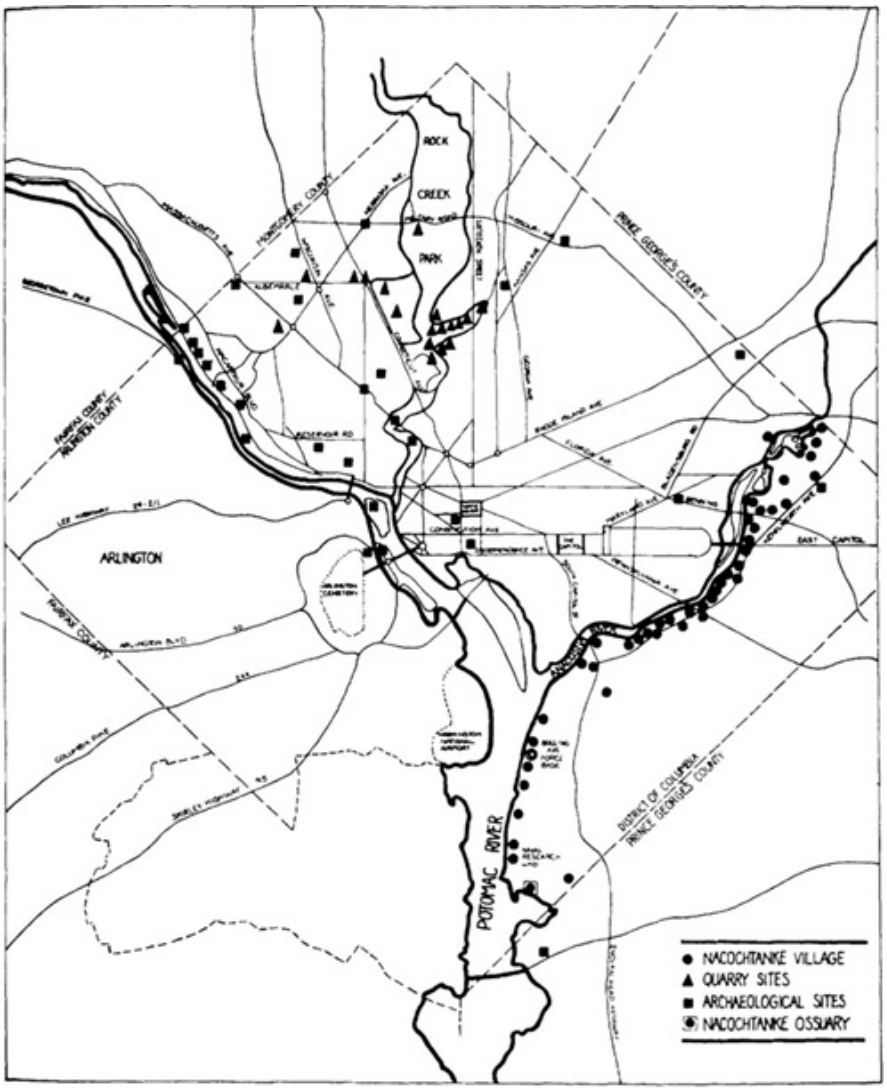
Dadas las limitaciones del enfoque convencional sobre el racismo, busco ampliar nuestra comprensión con una conceptualización complementaria: el privilegio blanco. Mi comprensión del racismo parte de la premisa de que la raza es una formación material/discursiva. Ya que la raza existe en varios dominios, los significados raciales están imbricados en nuestro lenguaje, en la *psique* y las estructuras sociales. Estas comprensiones raciales son a la vez constitutivas de las jerarquías raciales, y también son influidas por ellas. Así, sería imposible que nuestras estructuras y prácticas sociales no reflejaran estas comprensiones. Dada la naturaleza omnipresente de la raza, la creencia que la raza puede reducirse a actos hostiles y discriminatorios no parece del todo lógica. Por ejemplo, pocos

2 Aquí se requieren algunas palabras respecto a la terminología. En los estudios tempranos, el término *racismo ambiental* se usaba para nombrar patrones dispares. Con el tiempo, el término *equidad ambiental* cobró popularidad porque pareció más incluyente al cubrir tanto las disparidades raciales como las económicas. Muchos activistas, sin embargo, lo vieron como un intento de despolitizar la conciencia antirracista que subyace al movimiento. Además, como señala Heiman (1990), la inequidad ambiental implica que el problema corresponde a la asignación de la contaminación y de los riesgos ambientales, más que a un sistema económico particular. A la postre los activistas adoptaron el término de justicia ambiental, más incluyente y que además ofreció una conceptualización más politizada del problema. Aunque simpatizo con el movimiento por la justicia ambiental, utilizo el término de racismo ambiental para subrayar las disparidades raciales. En ocasiones, utilizaré *inequidades ambientales* para hablar de temas de asignación.

pueden negar que las ciudades en Estados Unidos son altamente segregadas. ¿Podemos atribuirlo solo a la discriminación de los propietarios? No. La segregación residencial es resultado de una diversidad de racismos. Además, existe una cantidad creciente de evidencia que sugiere que las respuestas raciales residen en el inconsciente, el resultado de una vida de adoctrinamiento (Devine, 1989; Lawrence, 1987). Así, al enfocarse de manera exclusiva en los actos discriminatorios se ignora el hecho que todos los lugares están racializados y que la raza contribuye a los lugares. Claramente, nuestra preocupación con los actos discretos de discriminación ignora dimensiones más vastas del racismo.

El foco en el privilegio blanco nos permite desarrollar una comprensión más estructural, menos consciente y más profundamente historizada del racismo. Esto es distinto al acto hostil, individual y discriminatorio, pues se refiere a los beneficios y privilegios que acumulan las personas blancas solo como resultado de su blancura. El privilegio blanco, al ser rara vez problematizado por los blancos, apenas se reconoce. De acuerdo con George Lipsitz, "como la categoría no marcada contra la que se construye la diferencia, la blancura nunca tiene que nombrarse, nunca tiene que reconocer su rol como un principio organizador en las relaciones sociales y culturales" (1995: 369). El privilegio blanco es, pues, un intento de nombrar un sistema social que trabaja para el beneficio de los blancos. El privilegio blanco, junto con el racismo abierto e institucionalizado, revela cómo el racismo moldea los lugares. Por tanto, en lugar de preguntar si se ubicó un incinerador en una comunidad latina debido al racismo del dueño, pregunto: ¿por qué los blancos no son afectados de la misma manera por la contaminación (véase Szasz y Meuser, 1997)? En el caso de Los Ángeles, la industrialización, la descentralización y la segregación residencial son claves para comprender este rompecabezas. Debido a la estrecha correlación entre el uso de suelo industrial, las concentraciones de contaminación y las personas de color, la pregunta central es ¿cómo se distanciaron los blancos tanto de la contaminación industrial como de los no blancos?

Figura 1. Comunidades de la zona de Los Ángeles identificadas en este estudio.



Este estudio no intenta probar que el racismo ambiental existe en Los Ángeles, puesto que seis estudios previos ya hicieron precisamente eso (Sadd *et al*., 1999; Boer *et al*., 1997; Pulido *et al*., 1996; Burke, 1993; Szasz

et al., 1993; UCC, 1987). Tampoco quiero sugerir que esta narrativa particular del racismo, el privilegio blanco, opera en todos los lugares de la misma manera. En cambio, mi objetivo es considerar los procesos socioespaciales de inequidad más amplios que producen el racismo ambiental. En este trabajo, primero desarrollo el concepto de privilegio blanco. En segundo lugar, reviso cómo el racismo y el espacio han sido conceptualizados en la literatura y la geografía del racismo ambiental urbano. En tercer lugar, usando fuentes primarias y secundarias, examino los procesos históricos y los fundamentos racistas que han contribuido al racismo ambiental que podemos observar hoy en día en Los Ángeles. Concluyo con un resumen de mis resultados y sus implicaciones.

El racismo y el privilegio blanco

Es necesaria una definición clara del racismo y el racismo blanco. Utilizo la idea de raza de Omi y Winant como "un concepto que significa y simboliza los conflictos sociales e intereses al referirse a diferentes tipos de cuerpos humanos" (1994: 55). Esta definición no solo reconoce las dimensiones físicas, materiales e ideológicas de raza, sino que también reconoce cómo la raza contribuye a la formación social. En específico, nos permite ver la raza como algo más que cuerpos de color. Nos permite reconocer la naturaleza penetrante y hegemónica de la raza, su carácter multiescalar y sus múltiples formas de existencia, incluyendo las ideas, palabras, acciones y estructuras. Este enfoque de raza sirve como base para una definición más amplia y fluida del racismo blanco. Defino el racismo blanco como aquellas prácticas e ideologías implantadas por estructuras, instituciones e individuos, que reproducen la inequidad racial y minan de forma sistemática el bienestar de las poblaciones racialmente subordinadas.

Debido a que existen múltiples motivaciones y formas del racismo (Goldberg, 1993; Cohen, 1992; Omi, 1992), existen también varias formas de analizar los racismos. En este trabajo considero solo dos: la escala y la intención. En cualquier esfuerzo para comprender el racismo, la escala es una herramienta de análisis importante, ya que se encuentra definida por el racismo, pero a la vez lo trasciende. Es necesario considerar las diversas

escalas en las que existe el racismo: individual, grupal, institucional, social, global. Aunque todas son distintas, existe una relación dialéctica entre estas escalas. Así, por ejemplo, una acción racista individual es precisamente eso, una acción realizada en el plano individual. Sin embargo, ese individuo se encuentra influido por los discursos raciales regionales o nacionales, y su acción influye y se reproduce en los discursos y estructuras raciales a escalas mayores. De manera que, aunque podemos enfocarnos en una escala particular, siempre debemos ser conscientes de su relación con otras escalas del racismo.

Un segundo tema crucial es la cuestión de la intencionalidad. Mientras la mayoría de las investigaciones en las ciencias sociales reconocen el racismo institucional y estructural, la comprensión popular suele enfocarse en la intencionalidad individual malintencionada. De hecho, esta tendencia se refleja en sentencias legales que de manera creciente exigen pruebas de intencionalidad (por ej. *Washington vs Davis*).[3] Para muchas personas, la existencia de un motivo hostil es necesaria para que una acción o inequidad puede considerarse como racista. Aun siendo conscientes del poder de las acciones hostiles y maliciosas, no podemos permitir que su naturaleza reprobable invisibilice el rango de motivaciones racistas que existen. Por ejemplo, en esta sociedad, existen blancos supremacistas, aquellos que evitan a las personas de color y aquellos que abogan por una sociedad "ciega al color". Cada una de estas posiciones manifiesta una consideración diferente. Aunque tal vez no sean comparables en términos morales, todas resultan racistas en tanto que debilitan sistemáticamente el bienestar de la gente de color (Delgado, 1995).

El privilegio blanco es una forma de racismo que subyace y es distinto del racismo institucional y abierto o declarado. Los subyace dado que los dos se afirman en la preservación de los privilegios de las personas blancas (con independencia de si los agentes reconocen esto o no). Pero también se distingue en términos de la intencionalidad. Se refiere a las estructuras, prácticas e ideologías hegemónicas que reproducen el status privilegiado

3 *Washington vs Davis* fue una demanda judicial donde la Corte dictaminó finalmente que una ley que produce un impacto racialmente desigual, sin tomar en cuenta el motivo, no es anticonstitucional.

de los blancos. En este escenario, los blancos no necesariamente *pretenden* lastimar a la gente de color, pero al ser inconscientes del privilegio de su piel blanca, y al acumular beneficios sociales y económicos manteniendo el *statu quo*, inevitablemente lo hacen. El privilegio blanco prospera en sociedades muy racializadas que abogan por la igualdad racial, pero donde los blancos no toleran los inconvenientes que podrían acompañar la búsqueda de la igualdad racial (Lipsitz, 1998; Delgado, 1995; Quadagno, 1994; Edsall y Edsall, 1991), o que les sean negados todos los beneficios de su blancura (Harris, 1993). Es justo porque muy pocos blancos son conscientes de los beneficios que reciben simplemente por ser blancos, y de que sus acciones, sin mala intención, pueden dañar el bienestar de las personas de color, lo que produce que el privilegio blanco sea tan poderoso y persistente.

El privilegio blanco nos permite ver cómo el orden racial funciona para el beneficio de los blancos, en forma de beneficios económicos, políticos (Ignatiev, 1995; Oliver y Shapiro, 1995; Almaguer, 1994; Harris, 1993) o psicológicos (Roediger, 1991; Fanon, 1967). El privilegio blanco es distinto de la supremacía blanca, una forma más evidente y reconocida de la dominación blanca (Frederickson, 1981: xi), como de las acciones discriminatorias individuales. Más bien, florece en *relación* con estas otras formas. Ya que la mayoría de los blancos no reconocen que pueden tener intenciones maliciosas, y debido a que el racismo se asocia con la intencionalidad maliciosa, los blancos pueden exonerarse de toda tendencia racista mientras ignoran su implicación en el privilegio blanco. Es esta capacidad de separar la intención del resultado lo que permite a los blancos reconocer que el racismo existe, pero rara vez identificarse a sí mismos como racistas.

La evidencia sobre el privilegio blanco es abundante. Incluye el grado en que muchos blancos asumen la propiedad de esta nación y de sus oportunidades, los esfuerzos de la gente de color de "superarse" para acceder a la blancura, la resistencia de blancos para desmantelar sus privilegios y, a la inversa, incluso el esfuerzo de algunos blancos por despojarse de

sus privilegios.[4] Consideremos el ejemplo de la resistencia blanca. La resistencia de blancos a la integración en escuelas, viviendas y los sitios de trabajo ha sido bien documentada (Quadagno, 1994; Almaguer, 1994; Massey y Denton, 1993; Foner, 1974; Saxton, 1971). Esta resistencia no sorprende mucho y se justifica desde varias racionalidades distintas. Lo que resulta más importante es que los blancos resisten porque sienten que tienen algo que perder. Según Lipsitz (1998), tienen "una inversión posesiva en la blancura", lo que quiere decir que la blancura trae beneficios que los blancos quieren retener. La jurista Cheryl Harris ha observado que "las suposiciones, privilegios y beneficios que acompañan el estatus de ser blanco se han convertido en una ventaja valiosa que los blancos intentan conservar y que aquellos que pretenden pasar por blancos quieren conseguir —con fraudes si es necesario—. Los blancos han llegado a contar y confiar en estos beneficios y, a lo largo del tiempo, estas expectativas han sido afirmadas, legitimadas y protegidas por la ley" (1993: 1713). Esta "ganancia" puede transformarse en propiedades de mayor valor, mejores escuelas o la capacidad para excluir a las personas de color de los lugares de trabajo. Que los blancos sientan que tienen el derecho a excluir a otros prueba hasta qué punto asumen como propias las oportunidades de la nación.[5] La posición privilegiada de los blancos se observa en casi todos los ámbitos, incluyendo la salud, la riqueza, la vivienda, los logros educativos y la calidad ambiental.[6]

El privilegio blanco es en particular útil para el estudio de los paisajes urbanos porque es a un tiempo histórico y espacial. Los esfuerzos para comprender la inequidad racial contemporánea a la luz del privilegio

4 Mis agradecimientos a John Paul Jones por esta observación.

5 Un ejemplo muy citado de esto es el anuncio de televisión de campaña del senador Jesse Helms donde aparece un trabajador blanco a quien se negó un trabajo, lo que debería haber sido *su* trabajo, debido a la acción afirmativa (Omi y Winant, 1994: 182).

6 Con esto no queremos negar las vastas diferencias dentro de las categorías de "blanco" y "personas de color." Evidentemente, los blancos están fragmentados por clase social, género, sexualidad y etnicidad (Brodkin, 1998). De manera similar, varios grupos de no blancos están racializados de forma diferencial. Por ejemplo, aunque los estadounidenses asiáticos disfrutan de los ingresos más altos de todas las personas de color, son con frecuencia víctimas de crímenes de odio. El punto central es que "la barra de color" sigue siendo un eje central de diferencia e inequidad.

blanco deben arraigarse en el pasado justo por la ausencia de un motivo hostil o un acto individual. Ya que los paisajes son artefactos de los racismos del pasado y el presente, encarnan generaciones de relaciones socioespaciales, lo que podría llamarse la "sedimentación de la inequidad racial" (Oliver y Shapiro, 1995: 5). De manera similar, el privilegio blanco, como una forma de racismo, se expresa en el espacio; de hecho, es contingente a un orden particular de arreglos espaciales. Tomemos por ejemplo el caso de los barrios. La explotación *plena* del privilegio blanco requiere la producción de lugares con un muy alto porcentaje de personas blancas. "Demasiadas" personas de color podrían reducir el estatus de un barrio, el valor de sus propiedades o el nivel general de confort para las personas blancas.

Un ejemplo breve puede demostrar cómo el privilegio blanco nos permite historizar el racismo ambiental: una fuente de contaminación se ubica cerca de un barrio negro porque el terreno es relativamente barato y adyacente a una zona industrial. Esta no es una acción malévola, motivada por la raza ni discriminatoria. De hecho, muchos argumentarían que resulta económicamente racional. Sin embargo, es racista en tanto resulta posible debido a la existencia de una jerarquía racial que reproduce la inequidad racial y debilita el bienestar de esa comunidad. Además, el valor de la tierra negra no puede comprenderse con independencia del valor de la tierra blanca, lo cual es un producto histórico. La tierra blanca es más valiosa debido a su blancura (Oliver y Shapiro, 1995: 147-161), y así resulta económicamente menos adecuada para quien pretende contaminar. Tampoco es casual la cercanía de la comunidad negra a la zona industrial. Dado el papel del Gobierno federal en la creación de suburbios, la oposición de los blancos a la integración y el hecho de que las comunidades negras han sido restringidas a las áreas que los blancos consideran no deseables, ¿pueden entenderse las pautas actuales de racismo ambiental al margen de una historia urbana racista?

Al final la cuestión con el privilegio blanco es, ¿a costa de quién? Es imposible privilegiar un grupo sin producir desventaja para otros. El privilegio blanco viene a expensas de los no blancos. Hablando históricamente, la suburbanización puede ser vista como una forma de privilegio

blanco. Permitió a los blancos vivir en ambientes residenciales económicos y limpios (Jackson, 1980). Fue un privilegio negado a la mayoría de las personas de color, pero que ellos también pagaron tanto en términos de una erosión de la calidad de vida en el centro urbano como de su subsidio al suburbio blanco mediante sus dólares en impuestos (Guhathakurta y Wichert, 1998). El privilegio blanco es útil en la discusión de la suburbanización y el racismo ambiental porque cambia nuestra comprensión del racismo más allá de las acciones discretas de ubicación, mientras que a la vez subraya la espacialidad del racismo.

Racismo y espacio en la investigación sobre racismo ambiental

En la actualidad, muchas cuestiones metodológicas se discuten en la literatura sobre justicia ambiental (Cutter, 1995; véase Been, 1995). Desafortunadamente, la naturaleza del racismo no es una de ellas. En una reseña de treinta estudios empíricos recientes, solo unos cuantos intentaron ofrecer una discusión sustantiva sobre el racismo en sí mismo (Baden y Corsey, 1997; Pulido *et al*., 1996; Hamilton, 1995; Krieg, 1995; Bullard, 1990; UCC, 1987),[7] aunque otros han explorado la naturaleza de la raza y el racismo en general (Szasz y Meuser, 1997; Goldman, 1996; Pulido, 1996; Bullard, 1994; Zimmerman, 1994). En cambio, la literatura se caracteriza en gran medida por los supuestos de "sentido común" que reflejan comprensiones populares y poco críticas del racismo.[8] Algo similar ocurre en cuanto a la espacialidad. Mientras el espacio ha recibido una atención considerable, no se puede decir lo mismo de la espacialidad, comprendida como la relación entre el espacio social y la sociedad (Soja, 1989). Al contrario, las

7 Los siguientes estudios no incluyeron una discusión o problematización significativa del racismo: Sadd *et al*., 1999; Boer *et al*., 1997; Scott *et al*., 1997; Cutter y Solecki, 1996; Yandle y Burton, 1996; Bowen *et al*., 1995; Perlin *et al*., 1995; U.S. GAO, 1995; Adeola, 1994; Anderton *et al*., 1994a; 1994b; Been, 1994; Boerner y Lambert, 1994; Cutter, 1994; Lester *et al*., 1994; Burke, 1993; Hird, 1993; Szasz *et al*., 1993; Zimmerman, 1993; Mohai y Bryant, 1992; Napton y Day, 1992; Cutter y Tiefenbacher, 1991; Hurley, 1988. Pero Pollock y Vittas (1995), en una discusión útil, reconsideran sus resultados a la luz de unas conceptualizaciones alternativas del racismo.

8 Esto no quiere decir que los investigadores no estén familiarizados con las comprensiones acerca de la raza de las ciencias sociales; más bien, indica que estas ideas no han encontrado un lugar en la literatura.

discusiones sobre el espacio se han centrado en temas como la distancia, la ubicación y la escala, que evita una conceptualización más teórica del espacio (Cutter y Solecki, 1996: 395, para una excepción). Sin embargo, la comprensión de la espacialidad nos incita a prestar mayor atención a la raza, ya que esta es una de las fuerzas sociales claves que moldean nuestras ciudades (y a Estados Unidos en general). En esta sección reviso cómo el racismo y el espacio se expresan en la literatura, mostrando cómo tres diferentes prácticas contribuyen a una conceptualización restrictiva del racismo y el espacio. En primer lugar, discuto el énfasis en la ubicación de la infraestructura, en segundo el rol de la intencionalidad, y en tercer lugar la escala espacial. Los dos primeros puntos voy a tratarlos juntos pues se encuentran relacionados de forma estrecha.

Localización e intencionalidad en las acciones discretas de racismo

Aunque una generación previa de académicos había explorado la relación entre la demografía y la contaminación (Berry, 1977), no fue sino hasta la década de los ochenta que estos temas se interpretaron desde la justicia ambiental (McGurty, 1995; véase Szasz y Meuser, 1997, para una reseña completa). Los primeros escritos sobre el racismo ambiental documentaron los efectos de discriminación (Bullard, 1990; UCC, 1987; U.S. GAO, 1984), pero no exploraban los procesos que los producían. Partiendo de comprensiones tradicionales del racismo en las ciencias sociales, Bullard (1996) argumentó que los efectos de la discriminación eran evidencia del racismo, con independencia del mecanismo que los producía (ubicación, discriminación en vivienda, chantaje laboral), debido a la naturaleza racista de la economía y de la estructura social amplia. Este autor define el racismo ambiental como "cualquier práctica, política o directriz que afecta diferencialmente o coloca en desventaja (intencionalmente o no) a individuos, grupos o comunidades en función de la raza o el color" (1996: 497). No obstante, investigaciones posteriores no solo han cuestionado la

existencia del racismo ambiental,[9] sino que además han producido una conceptualización demasiado restrictiva del racismo. Debido a esto, la localización, como una acción discreta y consciente, con frecuencia sólo se analiza relacionada con la ubicación de grupos racialmente subordinados (Bullard, 1996: 493) sin prestar suficiente atención a los procesos socioespaciales más amplios que dan lugar a esos patrones. De igual manera, las interpretaciones de racismo ambiental son consideradas sospechosas si no se cuenta la "evidencia" de su intencionalidad.

Los estudios históricos son un buen ejemplo sobre cómo ha ocurrido este cambio hacia una conceptualización más restrictiva del racismo. Además de enriquecer nuestra comprensión de las inequidades ambientales (Baden y Coursey 1997; Pulido et al. 1996; Yandle y Burton 1996; Krieg 1995; Been 1994),[10] la investigación histórica también ha problematizado el racismo al preguntarse: ¿Y si las personas fueran la prioridad? Aunque la línea de investigación que persigue es potencialmente fructífera, la conceptualización estrecha del racismo en esta literatura da lugar al cuestionamiento de las acusaciones de racismo: ¿cuáles eran las intenciones de los responsables? Para algunos investigadores, si la gente se trasladó después a localidades contaminadas, y se desconoce el motivo, las afirmaciones de racismo no pueden probarse:

> ¿Qué vino primero? ¿Se ubicaron los LULU (usos de suelo localmente no deseados) o las fuentes de amenazas ambientales en comunidades porque eran pobres, habitadas por personas de color o políticamente débiles? ¿O los LULU se establecieron originalmente en comunidades escasamente caracterizadas por la raza o el estatus económico, y con el tiempo, la composición racial de la zona cambió a raíz de la huida blanca,

9 En la mayoría de los casos, los investigadores solo quieren establecer si tales inequidades existen, pero a la vez ha habido una movilización de parte de corporaciones e instituciones políticamente conservadoras para refutar estas afirmaciones (Anderton *et al*., 1994a; 1994b; Boerner y Lambert, 1994; véase Goldman, 1996). Por supuesto, yo también soy una investigadora comprometida ideológicamente, y quiero reenmarcar el debate desde una perspectiva antirracista.

10 No incluyo el estudio seminal de Hurley sobre Gary, Indiana, en este grupo porque apareció más o menos en el mismo momento (1988) que el informe del UCC (1987). Claramente, este autor estaba a la vanguardia.

> los menores precios de la vivienda y todo un abanico de otros males sociales? (Cutter, 1995: 117).

Esta cita resume una serie de acontecimientos y una concepción del problema fuera de lugar. No discuto su precisión, pero sí la conceptualización subyacente del racismo y la ausencia de explicaciones alternativas entre la amplia literatura. Esta situación deriva de una comprensión del racismo como un acto discreto y hostil. En efecto, la *localización* de los riesgos ambientales constituye la expresión de una acción potencialmente racista. ¿Aquellos que contaminan o el Estado apuntan de forma consciente hacia los barrios no blancos? Los geógrafos, de manera comprensible, han preferido concentrarse en un conjunto más limitado de preocupaciones, que en los temas fundamentales de la degradación ambiental (Heiman, 1990) o el racismo (Pulido, 1996; Goldman, 1996):

> Un tema tan controvertido como la equidad ambiental requiere de investigación que evalúe la coincidencia espacial entre desventajas ambientales y las poblaciones marginadas o minoritarias, antes de analizar la causalidad y el papel del racismo (Bowen *et al*., 1995: 655).

Aun siendo loable, la agenda de investigación continúa siendo teóricamente débil y ofrece una comprensión limitada de cómo se interceptan el racismo, la calidad ambiental y los procesos urbanos. Las siguientes citas ilustran no solo el énfasis en la localización, sino también el grado en que la localización y las causas que la acompañan, contra los resultados, son claves para conocer la existencia del racismo.

> Claramente, *la localización discriminatoria no* es *la primera causa* en estos casos de "racismo ambiental". La distribución desproporcionada de rellenos sanitarios en Houston puede ser correctamente atribuida a la dinámica del mercado inmobiliario (Boerner y Lambert, 1994: 16. Subrayado propio).

> Existe, entonces, evidencia significativa de localización desproporcionada. Sin embargo, la evidencia es deficiente en varios sentidos. En primer lugar, la evidencia no establece que el proceso de localización, en lugar de las di-

> námicas del mercado, como la movilidad residencial, cause la disparidad. En segundo lugar, la evidencia no establece que *las decisiones de localización discriminen intencionalmente a las personas de color o a los pobres* (Been, 1993: 1014. Subrayado propio).

> Una distinción razonable es aquella entre la injusticia de resultado y la injusticia de intención. La injusticia de resultado es la más investigada. Se puede comprobar al examinar un punto en el tiempo y observar si las minorías o los pobres son representados de manera desproporcionada en lugares donde se ubican los residuos. La injusticia de intención tiene que ver con *decisiones de localización que son intencionalmente racistas —la actual ubicación desproporcionada de residuos en comunidades pobres y minoritarias—* (Baden y Coursey, 1997: 4. Subrayado propio).

Dos puntos sobresalen de los intentos de estos autores para separar analíticamente el racismo de procesos sociales más amplios (como el mercado inmobiliario): Primero, señalan la tendencia a limitar el racismo a la cuestión de la localización, y segundo, imponen el requisito de la intencionalidad.

La localización. El énfasis en la localización es significativo por dos razones. Primero, reproduce una comprensión errónea de la dinámica urbana al separar procesos socioespaciales más amplios de las explicaciones sobre la inequidad ambiental. Segundo, el mecanismo esencial es considerado, desafortunadamente, en términos de discriminación. Esto puede observarse, por ejemplo, en la forma como la localización discriminatoria se diferencia con cuidado de las fuerzas del mercado, que supuestamente no son racistas. Baden y Coursey (1997) van un paso más allá al explicitar cuáles situaciones históricas son potencialmente racistas y cuáles no (Tabla 1). Ofrecen seis escenarios para explicar la proximidad de una comunidad a los sitios peligrosos. Solo los escenarios 4 y 6 sugieren una clara situación de racismo ambiental (1997: 14). Los autores aclaran que la localización es el único mecanismo que puede considerarse como racismo ambiental. Al referirse a los escenarios 1, 2 y 3, señalan: "Si las personas se trasladan a un área que se sabe es peligrosa, puede ser que se reclame la existencia de racismo en los préstamos o en la inequidad

económica, pero la acusación de localización discriminatoria en sitios de desechos es frágil" (1997: 14).

Tabla 1. Los seis escenarios secuenciales y conclusiones de Baden y Coursey.

Escenario	Evento			Descripción
	1	2	3	
1	Ubicación	Peligro	Personas	Las personas se mudan a una zona conocida por ser peligrosa.
2	Ubicación	Personas	Peligro	Las personas se mudan a una zona que posteriormente se determina que es peligrosa.
3	Peligro	Ubicación	Personas	Se construye una instalación peligrosa y luego la gente se muda a la zona.
4	Peligro	Personas	Ubicación	Las personas viven en una zona y, de repente, se instala cerca de ellas una instalación conocida por ser peligrosa.
5	Personas	Ubicación	Peligro	Una instalación que no se considera peligrosa está ubicada en una región donde vive gente y posteriormente se determina que es peligrosa.
6	Personas	Peligro	Ubicación	Una instalación peligrosa está ubicada en una comunidad.

Esto no es falso, pero es muy problemático e ilustra una comprensión limitada del racismo y el espacio. Ni la conceptualización limitada del racismo, ni el fetichismo de la localización nos ayudan a comprender la naturaleza del racismo ambiental en un contexto urbano. En específico, no reconoce que el espacio es esencial para la (reproducción de un grupo racial particular, ni examina las relaciones fundamentales entre el racismo y la producción de zonas industriales, la contaminación y las áreas residenciales (Arnold, 1998).

La intencionalidad. En la cita de Been, mencionada arriba, el autor claramente ha encontrado evidencia de una localización desproporcionada. Sin embargo, sin utilizar la palabra *racismo*, contextualiza sus resultados para alertar al lector de que las acusaciones de racismo no pueden justificarse. Logra esto, primero, al sugerir que las dinámicas del mercado no han sido consideradas, y segundo, al referirse a la cuestión

de la intencionalidad. La evidencia tampoco permite "establecer que las decisiones de localización discriminaron intencionalmente a las personas de color". De hecho, la intencionalidad se convierte en la prueba de fuego para establecer si se ha cometido o no una acción racista. La intencionalidad no solo subyace las discusiones del racismo, sino cumple además con varios objetivos al definirlo, como han señalado los investigadores críticos del racismo legal (Armour, 1997; Crenshaw *et al*., 1995; Delgado, 1995). En primer lugar, el requisito de la intencionalidad reduce la probabilidad de percibir las acciones colectivas como racistas, ya que es más difícil probar la intencionalidad de un grupo que de un individuo. En segundo lugar, el énfasis en la intencionalidad permite una contracción continua de la definición del racismo, como se observa en algunos fallos jurídicos recientes (*Washington v. Davis*). Por último, con el requisito de la intencionalidad maliciosa, dimensiones enteras de la arena social son eximidas de contribuir a la desigualdad racial, incluyendo el inconsciente (Devine, 1989; Lawrence, 1987). Así, se naturaliza el funcionamiento normal del Estado y el capitalismo, y el racismo se reduce a una aberración.[11]

Un buen ejemplo de cómo se acota la acción del racismo puede evidenciarse en la conceptualización del mercado. En lugar de comprender el mercado como constituido por el racismo y, al mismo tiempo, como una fuerza activa en su reproducción, los investigadores lo tratan como algo que opera al margen de la raza (para una discusión más completa, véase Pulido, 1996: 146-147; Mohai y Bryant, 1992). Esto es preocupante debido al grado en que la existencia de la discriminación y el racismo se ha comprobado en el "libre mercado", incluyendo en el empleo (Kirschenman y Neckerman, 1991), la banca (Dymski y Veitch, 1996[12]) y la vivienda (Holloway, 1988[13]). ¿Acaso estas distintas fuerzas no configuran

11 La idea del racismo como una aberración, o como una irracionalidad, está muy arraigada en el discurso liberal acerca del racismo. Para una crítica, véase Crenshaw *et al*. (1995). Por la historia del racismo, Goldberg, (1993).

12 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

13 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

una ciudad e influyen en dónde se concentrará la contaminación? Una conceptualización tan limitada del racismo nos impide comprender el poder y la espacialidad del racismo o identificar su gran eficacia en la perpetuación de la injusticia ambiental.

Escala y racismo

Además de la localización y la intencionalidad, la escala espacial es otro factor implicado en la producción de una conceptualización limitada del racismo, pues refleja también las comprensiones normativas de raza y espacio. La escala es un aspecto metodológico fundamental en la literatura del racismo ambiental (Bowen *et al*., 1995; Cutter, 1995; Perlin *et al*.,1995; Zimmerman, 1993). Los investigadores no solo han examinado la inequidad ambiental a diferentes escalas, también han discutido sobre cuál es la escala más apropiada. La evidencia sugiere que las diferentes unidades de análisis, como los condados, los códigos postales o las áreas censales pueden dar lugar a diferentes hallazgos. Por ejemplo, la información en el ámbito del condado puede revelar un patrón de racismo ambiental, mientras que un análisis por área censal en la misma zona no lo hace (Bowen *et al*., 1995; Anderton *et al*., 1994a). Zimmerman ilustra cómo la escala espacial da lugar a confusiones en los esfuerzos para "comprobar" el racismo.

En el caso East Bibbs se mostró cómo los perímetros pueden afectar el resultado de un análisis de equidad en un contexto judicial. La corte utilizó un área censal para definir el límite en torno de un vertedero existente, y, con base en ello, determinó que una comunidad mayoritariamente blanca rodeaba el vertedero; los demandantes, en cambio, argumentaron que un área más amplia, que cubría el vertedero existente, y el propuesto era predominantemente negra (70%). Otro caso, *Bean v. Southwestern Waste Management Corporation*, empleó el análisis estadístico tanto en el ámbito de la ciudad como para un área más cercana a un depósito de residuos sólidos (definida desde la perspectiva del área censal). La Corte, usando los resultados estadísticos en ambos niveles geográficos, determinó que, aunque no existía discriminación en el plano del área censal, los barrios

más pequeños dentro de las áreas censales donde había depósitos eran relevantes para determinar los patrones de discriminación (1993: 652-53).[14]

Esta cita no solo muestra los problemas asociados con tratar al racismo como un fenómeno de lo uno o lo otro, sino que además sugiere el grado en que una comprensión limitada de escala se vincula a una conceptualización estrecha del racismo. Ambos son concebidos como objetos discretos, y no como procesos sociales. No pretendo sugerir que las Cortes no deben confiar en estos resultados, o que los actos discretos de racismo no son importantes, pero, como geógrafos, una de nuestras tareas debe ser explicar patrones y procesos. Esto exige que interroguemos críticamente nuestros conceptos y herramientas. En este caso, debemos reconocer el racismo estructural y reconceptualizarlo como una relación de poder, y del mismo modo necesitamos contextualizar la escala. Como argumenta Neil Smith, requerimos reconocer cómo se produce socialmente la escala, en lugar de tratarla como "una preferencia metodológica del investigador" (1993: 96). Además de distinguir las fronteras difusas de las unidades espaciales, debemos reconocer que los lugares son producto de un orden específico de relaciones sociales (Massey, 1994; Soja, 1989). Además, las relaciones sociales relevantes no residen sólo en la unidad espacial bajo consideración. Más bien, los lugares están producidos por otros lugares, lo que Massey (1994) llama relaciones sociales "extendidas". En consecuencia, nuestro análisis no solo debe operar en varias escalas de manera simultánea, sino que también es necesario considerar el rol funcional de esos lugares y de sus interconexiones. Esto tiene implicaciones en cómo usamos la escala en los estudios sobre racismo. Debemos tener en cuenta que nuestra escala de análisis seleccionada no necesariamente coincide con la escala de la acción racista. Si el racismo es constitutivo del paisaje urbano y varios tipos de racismos operan al mismo tiempo, debemos tener mucho cuidado con el tratamiento de la escala. El racismo y sus

14 Los casos citados son *East Bibb Twigs Neighborhood Association v. Macon-Bibb County Planning and Zoning Commission*. 888 F. 2d 1573 (11th Cir.), afirmado 896 F.2d (11 Cir.1989), y *Bean v. Southwestern Waste Management Corporation*, 482 F. Supp.673 S.D. Tex. 1979. En *Bean*, los residentes locales sentían que la decisión de ubicación fue discriminatoria, pero que perdieron porque no podrían comprobar la intención discriminatoria bajo *Washington v. Davis*.

consecuencias no necesariamente terminan en los perímetros de las áreas censales o en las fronteras de la ciudad.

Por consiguiente, en lugar de tratar las unidades espaciales como si existieran en un vacío, el estudio de la contaminación industrial requiere que nuestra atención no se limite a la infraestructura individual; debe atender la zona industrial más amplia donde esta se encuentra ubicada (Arnold, 1998). A su vez, la zona industrial debe comprenderse en relación con los suburbios de la clase trabajadora, los suburbios prósperos, los "centros urbanos" [15] y los distritos comerciales. Todos estos lugares representan relaciones de clase específicas funcionalmente vinculadas. Al mismo tiempo, estos sitios están racializados, y el racismo, en su formación y evolución, se desarrolla de maneras particulares.

En conjunto, estas tres prácticas, el énfasis en la localización, la intencionalidad y una conceptualización fija de la escala, muestran una capacidad limitada para explicar la geografía de los riesgos ambientales urbanos, en especial su concentración en zonas industriales (Baden y Coursey, 1997; Sadd *et al*., 1999; Pulido *et al*., 1996; Anderton *et al*., 1994b; Cutter y Tiefenbacher, 1991). Anderton *et al*., en su estudio nacional sobre los centros de transferencia, almacenamiento, y disposición (TSDF), encontraron que "el resultado más claro y consistente para todo el país es la aparente asociación entre la ubicación de los TSDF y otros proyectos industriales" (1994b: 239).[16] Este descubrimiento sugiere la necesidad de esclarecer la relación entre las zonas industriales, la suburbanización, los centros urbanos y la raza. Como ha señalado Been:

> Muchas fábricas y otras fuentes de residuos peligrosos estaban ubicados tradicionalmente en los centros urbanos debido a un mejor acceso al

15 Coloco el término de centros urbanos entre comillas para mostrar que es socialmente construido sin dejar de ser un concepto problemático para la política y las ciencias sociales.

16 El trabajo de Anderton *et al*. (1994a; 1994b) ha sido ampliamente criticado por varios motivos. Su resultado de no racismo ambiental ha sido cuestionado por asuntos metodológicos (Been, 1995) y también por su participación en una investigación patrocinada por la industria (Goldman, 1996: 132-134). Sin embargo, su énfasis en el uso industrial de tierras ha sido corroborado de manera creciente.

> transporte y a los mercados. En algunas ciudades, los desarrolladores ofrecieron vivienda barata a los trabajadores en las áreas circundantes. Cuando *los trabajadores se mudaron a otras áreas*, ya sea porque las fábricas habían cerrado o porque había disponibilidad de viviendas deseables en otros lugares, la vivienda barata en las zonas céntricas se pobló desproporcionadamente de pobres y personas de color (Been, 1993: 1017. Subrayado propio).

El proceso en que los "trabajadores se mudaron" es una clave importante para comprender los patrones contemporáneos de racismo ambiental. Mi tarea es describir este proceso.

El Racismo Ambiental, El Espacio Urbano, y El Privilegio Blanco en el Sur de California[17]

El racismo ambiental en el condado de Los Ángeles

Se han desarrollado seis estudios sistemáticos sobre racismo ambiental en Los Ángeles (cinco en el ámbito de condado y uno al de ciudad), con análisis de tres riesgos ambientales: vertederos de residuos tóxicos no supervisados (UCC, 1987), TSDF (Sadd *et al*., 1999) y las toxinas en el aire de acuerdo con el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) (Boer *et al*., 1997; Pulido *et al*., 1996; Burke, 1993; Szasz *et al*., 1993). La Tabla 2 resume estos estudios. Todos los estudios encontraron que los no blancos estaban más expuestos. Los más vulnerables eran los obreros latinos.[18]

17 Para este estudio, el sur de California se limita a los condados de Los Ángeles y Orange County.

18 Mexicano refiere las personas de origen mexicano; la mayoría, inmigrantes mexicanos; Chicano refiere las personas de ascendencia mexicana pero nacidas en EE.UU., y latino refiere todos los latinoamericanos.

Tabla 2: Resumen de seis estudios que examinan los riesgos ambientales en Los Ángeles

Autor/Año	Riesgo ambiental	Unidad de análisis	Métodos analíticos	Principales resultados
United Church of Christ (1987)[a]	Sitios abandonados con residuos tóxicos	Ciudad de Los Ángeles (excepto el conector portuario), códigos postales	Análisis descriptivo	Los latinos se ven afectados de manera desproporcionada
Burke (1993)	Instalaciones emisoras de toxinas atmosféricas (TRI)	Sectores censales urbanizados del condado de Los Ángeles	Mapeo bivariado, modelado lineal generalizado, análisis logit	Los latinos se ven afectados de manera desproporcionada
Szasz *et al.* (1993)	Instalações emissoras de toxinas atmosféricas (TRI)	Sectores censales del condado de Los Ángeles	Diferencia de medias, análisis de regresión, comparación de medias, análisis de regresión bidireccional	Las familias negras y latinas con ingresos entre 20 000 y 40 000 dólares se ven afectadas de manera desproporcionada.
Pulido *et al.* (1996)	Grupos de emisión de toxinas atmosféricas (TRI)	Sectores censales urbanizados del condado de Los Ángeles	Análisis descriptivos e históricos	Los latinos se ven afectados de manera desproporcionada
Boer *et al.* (1997)	Instalaciones de transporte, almacenamiento y eliminación (TSDFs)	Sectores censales del condado de Los Ángeles	Análisis visual, análisis univariados y multivariados	Los negros y los latinos de la clase trabajadora se ven afectados de manera desproporcionada
Sadd *et a*l. (1999)	Toxinas atmosféricas (TRI) (instalaciones, volumen de emisiones, toxicidad relativa)	Setores censitários de seis condados do sul da Califórnia (Los Angeles, Orange, Ventura, Riverside, San Bernardino e Imperial).	Comparaciones univariadas, logit binomial, logit ordenado, análisis de regresión tobit	Los afroamericanos y los latinos de las zonas urbanizadas y céntricas de Los Ángeles se ven afectados de manera desproporcionada.

[a] El estudio principal de la UCC examinó la relación entre las instalaciones comerciales de residuos peligrosos y la demografía de las comunidades. El análisis de los residuos peligrosos abandonados fue un componente menor del proyecto y presentó un menor rigor metodológico.

El estudio primario de la UCC examinó la relación entre las instalaciones comerciales de desechos peligrosos y la demografía de la comunidad. El estudio

de los desechos peligrosos abandonados fue un componente más pequeño del proyecto y se realizó con menor rigor en cuanto a metodología.

El análisis de tres riesgos diferentes arroja luz sobre diferentes rasgos del ambiente urbano. Por ejemplo, los sitios de desechos no controlados son, con frecuencia, sitios abandonados que revelan actividades industriales del pasado (Newton, 1998; Krieg, 1995; Colten, 1986). Los datos del TRI, que enlista edificaciones que emiten por lo menos 10 000 libras de toxinas en el aire cada año, muestra en gran medida las actividades industriales actuales. Las TSDF, a pesar de su reducido número, reciben mucha atención, pues son proyectos de alto perfil que requieren de amplias autorizaciones. En las ciudades, con frecuencia se ubican en zonas industriales, dada su naturaleza peligrosa y por su proximidad a los productores de residuos.

El primer estudio que indicó la existencia de racismo ambiental en Los Ángeles fue el informe de la United Church of Christ (1987). Aunque su alcance fue nacional, examinó la distribución de vertederos de desechos peligrosos no controlados en ciudades importantes, incluyendo Los Ángeles, y encontró que los latinos estaban expuestos de manera desproporcionada. En la Figura 2 he reproducido el mapa original del UCC que muestra la concentración de vertederos en la parte oriental de la ciudad. De 57 vertederos, 35 (61.4 %) se ubicaban en códigos postales donde por al menos 50 % de la población era latina (UCC, 1987: 38).[19] Esta área no es solo una de las zonas industriales más antiguas, sino también un barrio chicano de hace mucho tiempo (Pulido *et al*., 1996; Sanchez, 1993; Romo, 1983). El área es famosa por el mal olor del aire, e incluye uno de los códigos postales más contaminados del estado (Kay, 1994).

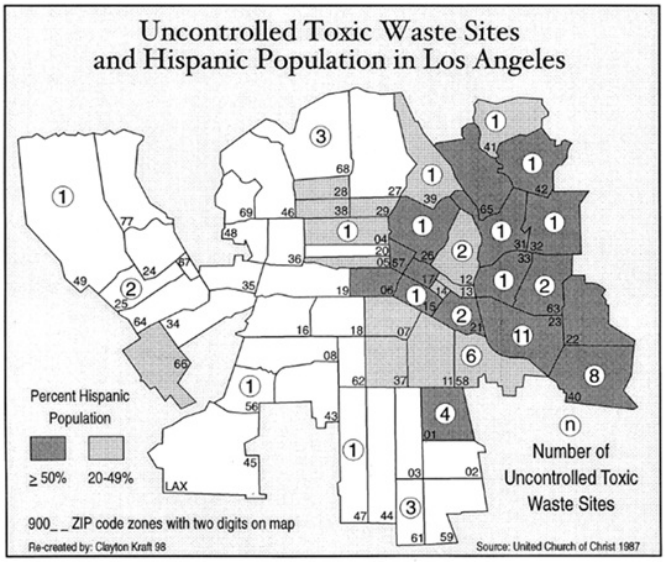
El siguiente grupo de estudios analizó las edificaciones que emitían contaminantes al aire (TRI). La Figura 3 presenta un mapa basado en la información examinada en el estudio de Sadd *et al.* (1999).[20] Este conjunto de datos representa, en gran medida, el mayor registro de eventos de contaminación.

19 Aunque el estudio de la UCC se basó en la información correspondiente al censo de 1980, y por lo cual no está muy actualizada, esta parte de la ciudad se ha vuelto más latina durante los años ochenta y noventa. Ahora los latinos constituyen más de 90% de la población en esa área (véase Allen y Turner, 1997).

20 Muchas gracias a Jim Sadd y Environmental Data Resources, Inc. por permitirme usar esta información. Para las Figuras 3 y 4, tomamos la información de riesgos ambientales de Sadd *et al*. (1999) y Boer *et al.* (1997), y lo sobr pusimos a la información del censo de 1990.

Burke (1993) identificó tres variables clave asociadas a las áreas del censo de edificaciones TRI: una alta presencia de poblaciones minoritarias (sobre todo latinos), ingresos más bajos y densidades de población muy altas. El estudio de Sadd *et al*. encontró que estos sitios se concentraban en "el área metropolitana altamente urbanizada de Los Ángeles […] donde el porcentaje de residentes afroamericanos o latinos excedía el promedio para el área de estudio" (1999: 111). Junto con Szasz *et al.* (1993), encontraron que las edificaciones se concentraron en zonas de clase obrera, más que en zonas pobres o ricas (véase también Cutter y Solecki, 1996). El estudio de Pulido *et al.* (1996) se enfocó en conglomerados de emisiones y encontró que las mayores concentraciones de sitios se ubican en el este y sur de Los Ángeles.[21]

Figura 2. Primer estudio sobre racismo ambiental en el sur de California: la Iglesia Unida de Cristo, sobre desechos peligrosos no controlados en la ciudad de Los Ángeles, 1987. El estudio de la UCC no incluyó toda la ciudad: no se muestra el corredor estrecho que conecta la parte principal de la ciudad con el puerto.



21 El agente de emisión más grande fue una refinería petrolera en Torrance, una ciudad de ingresos medios (véase también Burke, 1993); sin embargo, a una escala más refinada, se encontró que los barrios más cercanos a la refinería eran primordialmente latinos.

El último tipo de riesgo estudiado son las TSDF. La Figura 4 muestra la información analizada por Boer *et al.* (1997). En este estudio, los autores encontraron un patrón muy similar a lo identificado por Sadd *et al.* (1999) y Szasz *et al.* (1993): la exposición desmedida de las comunidades obreras de color. Utilizando un modelo multivariado, los autores encontraron que "la raza sigue siendo un factor, junto con el uso industrial de suelo y el empleo en la manufactura; el incremento en el ingreso, por otro lado, tiene un efecto positivo y luego negativo, en la probabilidad de localización de TSDF" (1997: 795). Encontraron que 5.2 % de los negros y latinos vivían en áreas censales con una TSDF, frente a solo 2.9 % de los blancos.

Los resultados de estos seis estudios sugieren patrones raciales y espaciales importantes asociados a las tres formas de contaminación. Primero, al parecer, la mayoría de los riesgos industriales en el sur de California se concentran en la parte central y sur del condado de Los Ángeles. Este núcleo más antiguo está habitado por personas de color, mientras que los blancos viven en la periferia. Dentro de esta amplia zona, un grupo de riesgos coincide con importante corredor de transporte, la autopista Interstate-5 y el ferrocarril, que va desde el este de Los Ángeles, atraviesa el centro y entra al Valle de San Fernando. Un segundo grupo importante forma una franja ancha desde el centro hacia el puerto. Esta distribución refleja tanto la dinámica industrial contemporánea como la histórica. En segundo lugar, como ya lo hemos mencionado, todos los estudios encontraron evidencia de racismo ambiental, incluso cuando se registran los ingresos. Esto confirma el resultado de Perlin *et al.* (1995) acerca de que la contaminación se concentra en algunas áreas urbanas extensas habitadas predominantemente por minorías.

En tercer lugar, son los trabajadores latinos y, en menor grado, los afroamericanos quienes son los principales afectados. Esto refleja tanto los patrones de segregación racial como el rol histórico y continuo de los latinos como obreros con bajos salarios de la región (Scott, 1996a; Morales y Ong, 1993; Ong y Blumenberg, 1993). Lo que es significativo es que casi ningún blanco vive en estas áreas y, por tanto, no están expuestos

a los peligros referidos.[22] Como sugieren los mapas de las Figuras 2-4, simplemente existe mucha menos contaminación hacia las afueras de la ciudad. Considero que solo podemos comprender estos patrones contemporáneos al examinar el desarrollo histórico del espacio urbano a escala regional y que estos procesos están inherentemente racializados. Mientras algunas formas del racismo ambiental se atribuyen de forma directa a las acciones evidentes de discriminación, a continuación, voy a precisar cómo el privilegio blanco contribuye a este patrón más general.

22 Una excepción importante podría ser los sitios Superfund. La producción militar es responsable de una seria contaminación del suelo y de aguas subterráneas, como en el sitio Lockheed en North Hollywood-Burbank, y Rocketdyne en el oeste del Valle de San Fernando. No existe estudio sistemático alguno de este tipo de contaminación en la región.

Figura 3. Distribución del inventario de los lugares de emisiones tóxicas (TRI) y población blanca no hispana en el sur de California.

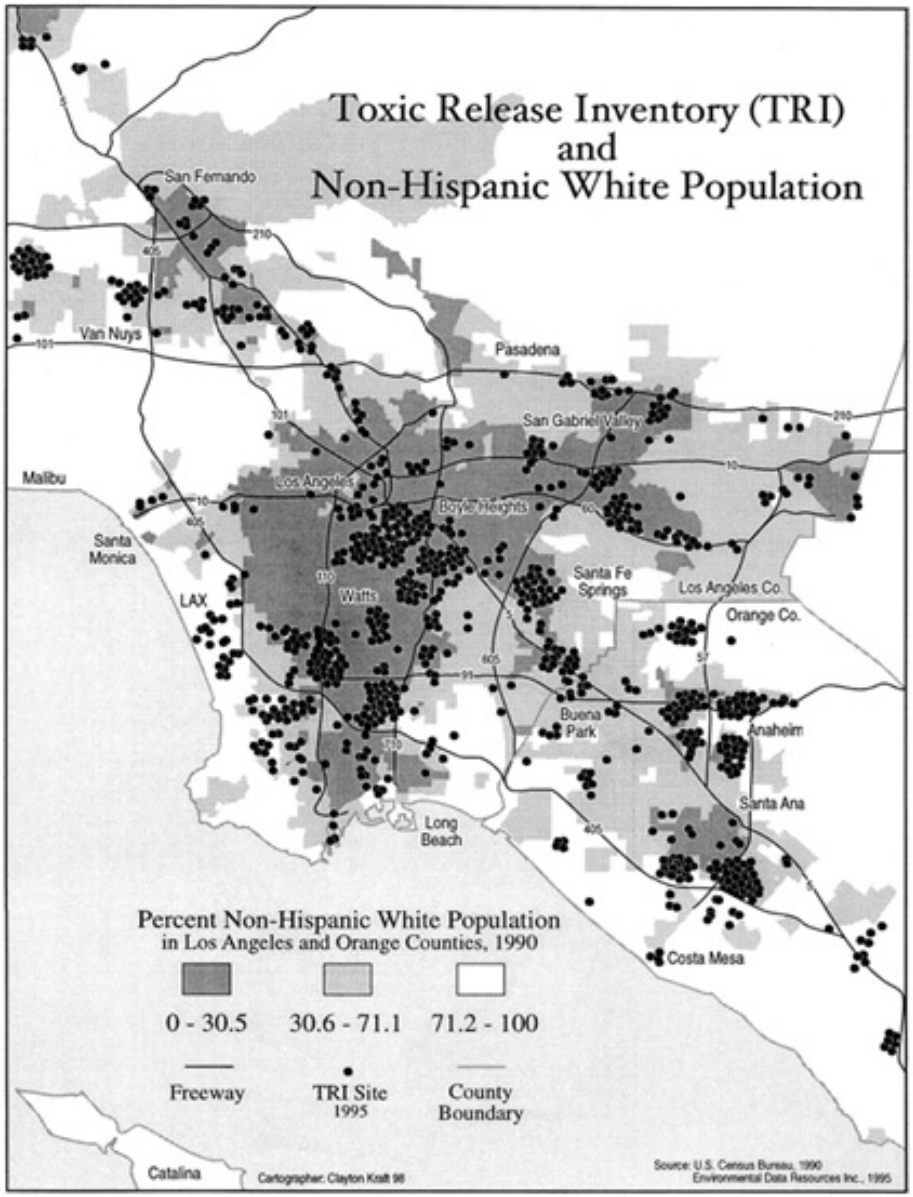
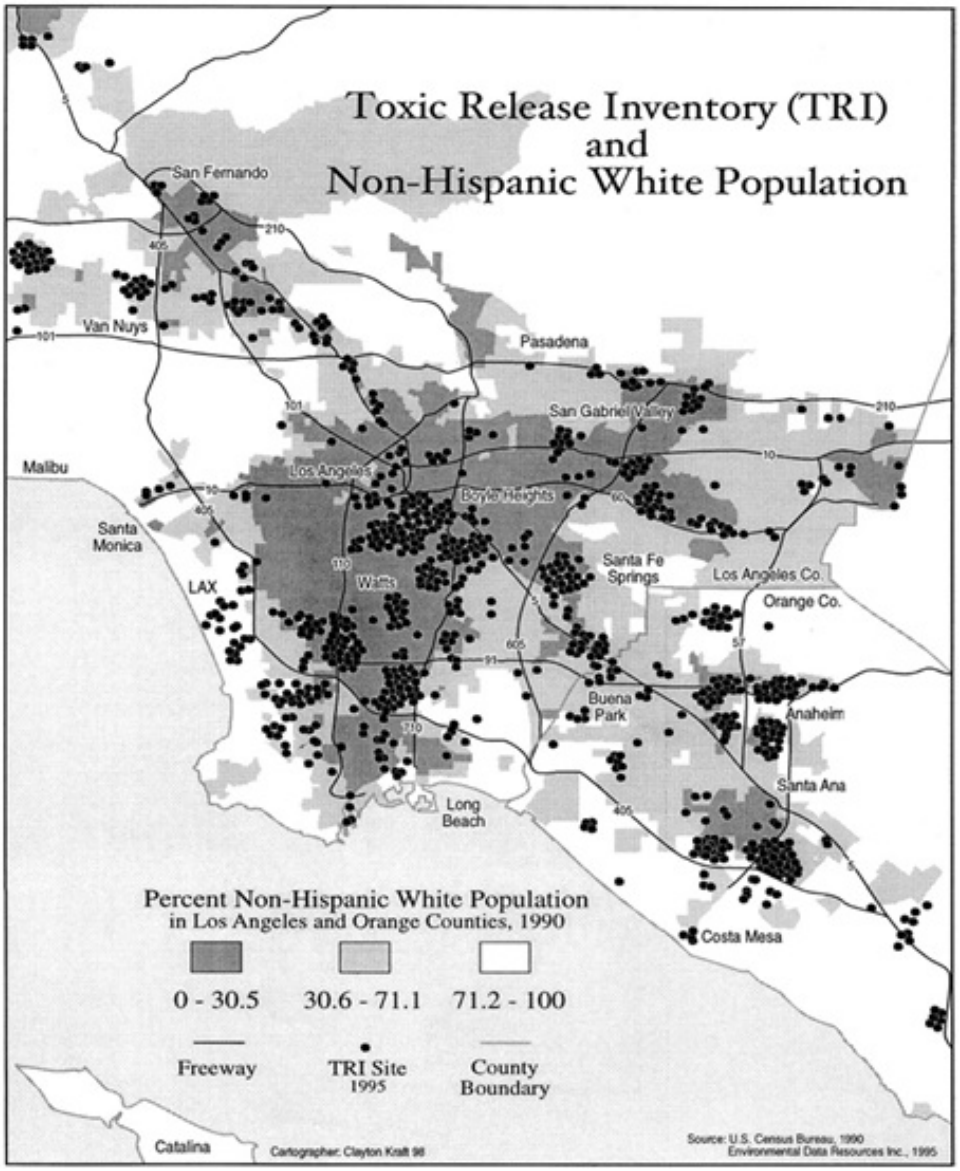


Figura 4. Distribución de las instalaciones de transferencia, almacenamiento y eliminación (TSDF) y población blanca no hispana en el sur de California.



respuesta a las condiciones creadas de forma deliberada por el Estado y el capital (Hise, 1998; Harvey, 1985; Walker, 1981). Mi objetivo es mostrar cómo la evolución histórica de estos patrones y el racismo contribuye a producir los patrones espaciales asociados con el racismo ambiental.

Sin embargo, antes de proponer esta geografía histórica, es útil considerar cómo Los Ángeles se parece, y a la vez es única, en relación con otras áreas urbanas. A pesar de que se discute la naturaleza y la definición de suburbio (Kling *et al*., 1995; Sharpe y Wallock, 1994; Garreau, 1991; Fishman, 1987), es innegable que las regiones urbanas han sufrido una reestructuración fundamental en las últimas cinco décadas, en la que los blancos y la clase media de todos los colores se desplazan hacia afuera, con consecuencias importantes para los centros de las ciudades. Este proceso de desconcentración ha sido descrito como "una dispersión regional masiva de población, industria y comercio", que implica "la reestructuración tanto del centro como de las áreas periféricas" (Gottdiener y Kephart, 1995: 33-34).

Los Ángeles no ha escapado a estos cambios profundos, pero su experiencia es también singular (Dear y Flusty, 1998; Soja, 1989; 1996; Davis, 1992). Desafortunadamente, la realidad de Los Ángeles es con frecuencia velada por diversas comprensiones erróneas sobre la región (Soja, 1996: 427). Por ejemplo, debido a su gran expansión, muchos ignoran la relevancia histórica y contemporánea de los centros urbanos de Los Ángeles. Aunque a menudo las zonas centrales son consideradas sitios de pobreza y sufrimientos, esta es una lectura demasiado simplista. En los barrios del este y del centro-sur viven personas pobres de color, pero también son sitios de comunidades vibrantes con una variedad de industrias y almacenes. Además, y quizá debido a la influencia de Hollywood y Disneylandia, muchos no son conscientes de que Los Ángeles es el condado líder en manufactura de la nación. De esta manera, la geografía histórica de la industria ha sido fuerza poderosa en la configuración de la región (Soja, 1989).

El proceso de suburbanización también es bastante singular en Los Ángeles, aunque no se inició allí; los suburbios alcanzaron su culmen cuando

la especulación de bienes raíces y el "vivir la buena vida" se convirtieron en la piedra angular económica y social de la región (Fishman, 1987: 155). Por último, mientras muchas ciudades en EE. UU se han caracterizado por estructuras raciales bipolares (por lo regular blanco/negro), solo en tiempos recientes se han vuelto multirraciales. En contraste, Los Ángeles siempre ha sido racialmente diversa. Esto es importante pues la larga presencia de grupos raciales/étnicos diversos ilustra cómo los no blancos han experimentado el racismo, subrayando la profundidad del privilegio blanco.

Patrones residenciales e industriales tempranos, 1848-1920

La suburbanización temprana deriva parcialmente del rechazo de la población blanca de clase media a vivir cerca de inmigrantes y personas de color. Los blancos procuraban la suburbanización por diversas razones, pero, con independencia de sus motivos, su decisión se basó en el privilegio blanco. El historiador Robert Fogelson (1993) ha señalado que poco después de que los anglos dominaron Los Ángeles (1848), la ciudad pasó de ser una comunidad agregada espacialmente a ser una ciudad en rápida expansión. Esta transformación fue impulsada por varias fuerzas, incluyendo una población que se expandía, la especulación de la tierra y el hecho de que muchos angelinos blancos había nacido en la ciudad y se negaban a vivir cerca de grupos socialmente subordinados. Fogelson ha argumentado que, dado que los blancos que llegaron a Los Ángeles tenían una cierta seguridad económica y les preocupaba más el estilo de vida que la sobrevivencia económica, su prosperidad les hizo abrazar los suburbios. Así, los anhelos de los blancos sobre sus residencias y los intereses inmobiliarios fueron dos de las fuerzas más poderosas que moldearon tempranamente a Los Ángeles:

> La dispersión única de Los Ángeles reflejada no tanto su cronología, geografía o la tecnología, sino en el carácter excepcional de su población. No era como Chicago […] habitada mayormente por inmigrantes europeos empobrecidos e inseguros, quienes […] fueron confinados a los barrios marginados y guetos abarrotados de la ciudad […] Los Ángeles fue poblado principalmente por

> americanos oriundos (de nacimiento) con recursos adecuados y aptitudes competitivas, que enfrentaron con confianza a los problemas de adaptación gracias a un idioma común y a sus antecedentes similares […] Además, los americanos oriundos (por nacimiento) llegaron a Los Ángeles con la idea de la buena comunidad materializada en las viviendas unifamiliares, ubicadas en lotes grandes, rodeados de césped, y "aislados" de las actividades industriales. Las viviendas multifamiliares […] separadas por calles desordenadas y […] la industria […] no eran para ellos, su visión se materializó en los suburbios residenciales (Fogelson, 1993: 144).

Además de los anhelos de exclusividad de los angelinos blancos, la suburbanización también fue promovida por industriales que buscaron proveer viviendas a la clase obrera blanca como una medida para evitar el descontento laboral. Según un folleto promocional:

> El secreto real de la eficiencia de los trabajadores del sur de California puede encontrarse en su vida doméstica […] Los departamentos son desconocidos aquí y los trabajadores viven en sus pequeños *bungalós* propios rodeados de mucha tierra para las frutas, verduras y flores, y donde los niños saltan y juegan todo el año […] Esto produce satisfacción y la satisfacción lleva a la eficiencia (L.A. Chamber of Commerce Industrial Department, 1926).

A medida que los blancos se mudaron hacia afuera, los chicanos, afroamericanos, los americanos-japoneses, los americanos-chinos y lo que quedaba de la población india fueron relegados a San Pedro, Watts y al centro de la ciudad (Anderson, 1996: 342-346; Horne, 1995: 27; Sanchez, 1993; Romo, 1983; Warren, 1986-1987). A partir de la década de los veinte la segregación residencial se aplicó de forma violenta (Massey y Denton, 1993; De Graff, 1970). Como resultado, por los miles de "mexicanos, japoneses y negros que vivían entre el comercio y la industria en los pequeños guetos del centro de Los Ángeles y San Pedro, existía un millón de americanos blancos que residían en los suburbios, expandiéndose hacia el norte a Hollywood, el este hacia Pasadena, al sur hacia Long Beach y al oeste hacía Santa Mónica" (Fogelson, 1993: 147). Estas diferencias tempranas

en la calidad ambiental fueron reguladas por las leyes de zonificación en la década de los veinte, lo cual dio lugar a la concentración de la actividad industrial en áreas no blancas y de inmigrantes (Zoning Map Company, 1930).

Este proceso temprano de emigración blanca hacia los márgenes se caracterizó por varias formas de racismo. Para empezar, el hecho que se considerara a los no blancos como indeseables refleja una jerarquía racial. Más consciente fue la exclusión de las personas de color de los desarrollos de vivienda blanca. La mayoría de los desarrolladores que explícitamente discriminaron a las personas de color negándoles la vivienda pudieron haberlo hecho por distintos motivos. Algunos pueden haberse opuesto a la convivencia entre blancos y no blancos, otros sólo pudieron considerar que la presencia de no blancos reduciría el valor de las propiedades. Sin embargo, más allá de los motivos, todas estas acciones se fundaban en el privilegio blanco y disminuyeron el bienestar de las personas de color. Este es un ejemplo de cómo el privilegio blanco puede coexistir con otras variantes del racismo en la conformación de los patrones residenciales.

Hasta la década de los veinte el sector industrial era débil y se concentró en el centro debido a la limitada infraestructura. Durante esos años, no obstante, los líderes sociales buscaron construir la base para la manufactura de la región y diversificar la economía. Entre 1919 y 1933, el condado de Los Ángeles pasó del lugar 27 al sexto en cuanto al valor de los productos manufacturados (L.A. Chamber of Commerce Industrial Department, 1934). Varios factores impulsaron este crecimiento, incluyendo el éxito de la estrategia de la "sucursal de planta", el deseo del capital de trabajo regulado y las normas de zonificación (L.A. Chamber of Commerce Industrial Department, 1929), así como los esfuerzos coordinados de industriales, desarrolladores y planificadores para transformar el fundamento del paisaje de Los Ángeles del turismo y la especulación inmobiliaria hacia la manufactura (Hise, 2000; Fogelson, 1993).

La manufactura y la geografía residencial han tenido una influencia duradera. Los mexicanos y la industria fueron empujados de continuo hacia al este, desde la Plaza Central hacia el río Los Ángeles (Romo, 1983;

Sanchez, 1993), lo que fortaleció aún más el papel del barrio como distrito industrial. Los industriales y los planificadores decidieron desarrollar este sitio por su proximidad al ferrocarril, con la esperanza de generar un mayor peso de carga (Los Ángeles Central Manufacturing District, 1923). En parte debido a la infraestructura industrial existente (ferrocarriles, suelos dedicados al uso industrial, suelos ya contaminados) y a la disponibilidad de una amplia fuerza de trabajo barata, la zona este continúa siendo un área industrial importante.

La producción del espacio urbano en Los Ángeles durante la década de los veinte muestra cómo la raza y la clase social influyeron en la localización tanto de los distritos residenciales como de los industriales. Los blancos acomodados se mudaron a suburbios como Pasadena, Bel Air, Rancho Palos Verdes y Beverly Hills, y nunca fueron seriamente amenazados por la actividad industrial. En cambio, la industria se desarrolló en los espacios no blancos (el lado este y el sur del centro) y de la clase obrera blanca. Como se mencionó antes, el interés de los industriales era evitar a los sindicatos (concentrados en el centro) y aplacar a los trabajadores blancos mediante la propiedad de viviendas, para dar lugar al desarrollo de los suburbios industriales. La creación de comunidades como Torrance, Huntington Park y Bell ofreció una experiencia suburbana a todos los blancos con independencia de la clase social (Parson, 1984). La fuerza de la frontera de color se puede ver en cómo Bell, por ejemplo, se jactaba de proporcionar "hogares para los trabajadores de la industria sin negros y muy pocos mexicanos y chinos" (L.A. Chamber of Commerce, 1925). De manera similar, Compton se describió a sí mismo como un sitio poseedor de "casas baratas e individuales, donde flores y jardines pueden cultivarse todo el año. El servicio blanco prevalece" (L.A Chamber of Commerce, 1925). Sin embargo, a pesar del poder abrumador del privilegio blanco para (re)producir la frontera de color, también es evidente que esta articulación del racismo se basa no solo en las divisiones de clase de la población blanca (que permitieron la creación de comunidades acomodadas), sino además en un intento por incorporar a aquellos que antes se consideraban "no del todo blancos" (Brodkin, 1998) a nuevas formas aceptadas de blancura.

Mientras la suburbanización continuaba, los que antes habían sido suburbios cercanos se convirtieron en el centro de la ciudad, pues los blancos se habían mudado y las personas de color ocuparon luego su lugar, un proceso conocido como sucesión étnica.[23] En consecuencia, los blancos ricos nunca fueron sistemáticamente expuestos a la contaminación, mientras que, a lo largo del tiempo, la clase obrera blanca pudo evitarla aprovechando las nuevas oportunidades de vivienda. Así, más allá de las diferencias de clase social, todos los blancos disfrutaron del privilegio blanco, aunque en diferentes grados.

La expansión residencial e industrial en la época de la Segunda Guerra Mundial

La Depresión y la Segunda Guerra Mundial intensificaron de manera considerable el proceso de suburbanización blanca, pero esta, en lugar de ser un proyecto privado, fue subvencionado activamente por el estado, en detrimento de las personas de color que vivían en el centro de la ciudad (Guhathakurta y Wichert, 1998; Ebner, 1987: 234-35). La Figura 5 muestra el éxodo provocado por los cambios políticos y económicos de la Segunda Guerra Mundial. No solo se trataba de la constante migración de los blancos hacia la periferia, sino también de millones de angelinos que arribaban a la ciudad y se asentaron en los suburbios. En contraste, los afroamericanos y mexicanos recién llegados fueron relegados respectivamente al gueto y al barrio. Los americanos-japoneses, al ser liberados de los campos de concentración después de la guerra, se agruparon en espacios de gente negra y morena, como el área de Crenshaw y Boyle Heights, al igual que en comunidades rurales como Gardena (Warren, 1986-1987).

El crecimiento económico provocado por la inversión en defensa no solo proporcionó empleos; la necesidad de vivienda para estos trabajadores

23 Este es un tema importante que muy pocos han tratado seriamente —la exposición histórica de la clase obrera blanca—. El hecho de que los blancos de clase trabajadora puedan haber estado expuestos desproporcionadamente en el pasado no le resta veracidad al argumento sobre que el racismo ambiental existe en la actualidad. Más bien, sugiere la naturaleza cambiante de la raza y la necesidad de considerar la historicidad de su espacialidad.

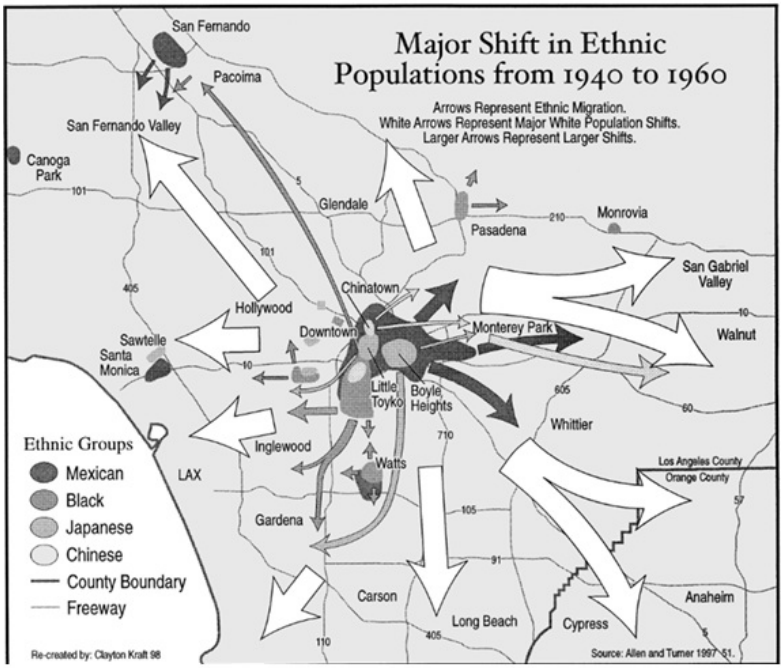
provocó un auge en el sector de la construcción. Hise ha argumentado que este periodo es fundamental para explicar la fragmentación contemporánea del sur de California: "La emergencia de Los Ángeles como una región plenamente urbanizada ocurrió alrededor de un grupo de polos de crecimiento industrial descentralizado […] (y la) política industrial y de vivienda vinculada a la emergencia de defensa aceleró este patrón inicial de descentralización" (1993: 97-98) (Figura 6).

Políticas federales, como los Títulos I y VI del Federal Housing Act (FHA), procuraron incrementar la oferta de vivienda (Doti y Schweikart, 1989), de una manera claramente racista. Tal vez la de mayor relevancia fue la institucionalización de las prácticas de exclusión por la Home Owners Loan Corporation (HOLC)[24] y el FHA.[25] Aunque estas medidas tuvieron la intención de proteger a los pequeños propietarios de los embargos, clasificaron los barrios en orden descendente de la A a la D, con consecuencias profundas para el desarrollo urbano futuro. La calificación A se reservó para los "nuevos suburbios acomodados, extendidos en calles curvilíneas muy lejos de los problemas de la ciudad" (en Jackson, 1980: 424). En el otro extremo se hallaban los barrios no blancos. De hecho, el estudio de la HOLC sobre el área de Los Ángeles señala a las comunidades suburbanas de Pasadena, Beverly Hills, Santa Mónica y Palos Verdes como áreas A.

24 La línea de negocio de la empresa incluye la tramitación de préstamos para terceros a comisión u honorarios.

25 Sus siglas corresponden a la Administración Federal de vivienda. Esta entidad gubernamental otorga un seguro hipotecario a los prestamistas aprobados por la FHA para protegerlos contra pérdidas, en caso de que el propietario de la vivienda no cumpla con los pagos del préstamo.

Figura 5. Proporción de emigración racial/étnica del centro de Los Ángeles entre 1940 y 1960.



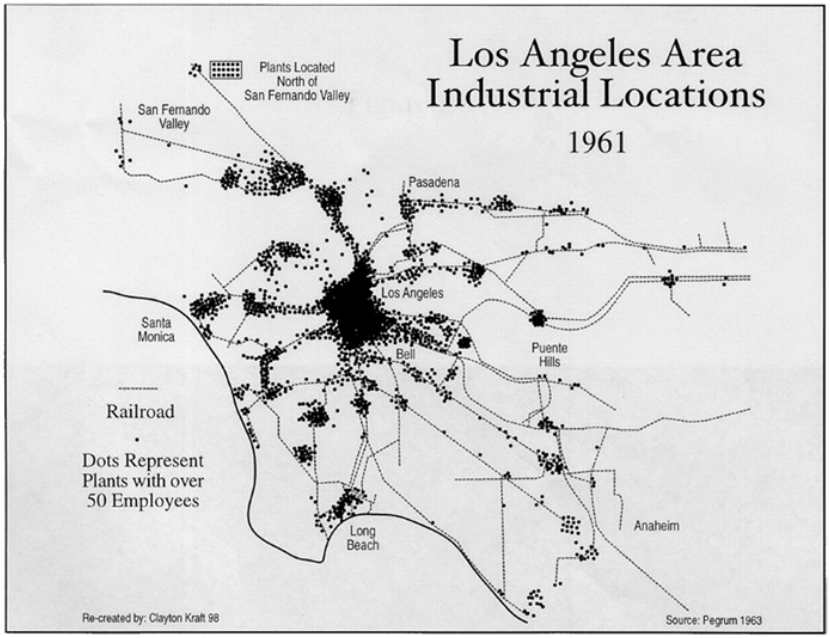
Las comunidades de clase obrera blanca eran consideradas B, y los barrios negros, latinos y asiáticos, principalmente en el este, el centro y al sur del centro, C y D (U.S. Division of Research and Statistics, 1939). Un informe confidencial del equipo encuestador ilustra el grado en que las personas de color fueron consideradas como un problema y una amenaza potencial para el desarrollo blanco:

> Los negros no constituyen un problema racial en el área en conjunto. Aunque su número ha aumentado rápidamente, su proporción en relación con la población total del condado se ha mantenido constante desde 1890. La raza negra está bastante bien confinada a unas cuantas secciones dentro del condado. Ocupan un área grande al suroeste del distrito de negocios […] Aunque el número de negros es superior al promedio en Beverly Hills, la mayoría son sirvientes *y no tienen propiedad en la comunidad* […] El

> mayor problema racial que existe en Los Ángeles, y que no se muestra en los datos del censo, es el ocasionado por el gran número de mexicanos, clasificados como blancos por la oficina censal […] Mientras muchos de la raza mexicana son de alto nivel y descendientes de los españoles de clase alta que anteriormente fueron dueños de todo el territorio del sur de California, *la gran mayoría de los mexicanos son un problema local* y su importación en los últimos años para trabajar en los cultivos agrícolas ha sido reconocida como un error (Bowden y Mayborn, 1939. Subrayado propio).

Las consecuencias de estas formas evidentes e institucionalizadas de racismo se hicieron patentes en dramáticas desigualdades urbanas. Por ejemplo, a pesar de la prohibición de los convenios restrictivos en 1948 (que después se revocó en California), menos de 2% de la vivienda financiada con seguros de hipoteca federal se le otorgaba a los negros (Anderson, 1996: 345).

Figura 6. Distribución de las concentraciones industriales en el sur de California, 1961.



Además, en 1955, la proporción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en Los Ángeles era superior de nueve a uno (Cohan, 1956: 46). Al ser en gran medida excluidos de los nuevos suburbios, la escasa construcción de unidades multifamiliares implicó un mayor hacinamiento en el barrio y el gueto. Las minorías también se hallaban en desventaja dado que los fondos masivos se canalizaron hacia los suburbios.[26] No solo había menos dinero disponible para el desarrollo del centro de la ciudad, sino que estos proyectos se construyeron con frecuencia, literalmente, a expensas de los no blancos. Por ejemplo, el sistema de autopistas de Los Ángeles, que sustenta la estructura suburbana, se construyó en buena parte por medio de las comunidades de color, en particular los barrios chicanos, lo que ocasionó disturbios severos a la comunidad y a su patrimonio inmobiliario (Avila, 1998). El resultado de estas prácticas derivó en una creciente polarización racial y económica. En 1960, el ingreso promedio en el centro y este de Los Ángeles era de 5 916 dólares, mientras que en la periferia era de 8 575 dólares ("Los Ángeles 1965: Market and Media" 1965: M12).[27]

Una herramienta de segregación afín fue la incorporación de la ciudad suburbana. El carácter excluyente de la suburbanización se ve acentuado por el hecho de que, una vez que la gente llegaba, intentaba aislar su inversión mediante la incorporación a la ciudad. Esto no solo protegió sus dólares de impuestos, sino también les ofreció mayor control sobre el uso local del suelo, incluyendo la industria, las escuelas y la capacidad de excluir a personas ajenas por medio de, por ejemplo, convenios restrictivos, publicidad y estándares mínimos para el tamaño de lotes (Miller, 1981; Babcock y Bosselman, 1973). Entre 1955 y 1960 se incorporaron unas veinte cinco comunidades al condado de Los Ángeles (Miller, 1981: 22),

26 Esto ocurrió por una división de fondos y por un subsidio directo. Por ejemplo, el Bradly-Burns Act de 1956 autorizó a las municipalidades locales en California recolectar un impuesto de ventas del uno por ciento para su propio uso. Ya que muchos residentes urbanos hicieron la compra en los nuevos *malls* suburbanos, en efecto, estaban subvencionando las áreas periféricas, y así les permitían mantener impuestos de propiedad muy bajos o inexistentes (Davis, 1992: 166)

27 Llegaba a estas cifras al promediar los ingresos reportados para las siguientes comunidades como se identificaron en el mercado de los medios de *Los Ángeles Times*. Para el centro, incluye el noreste, el este, el central y el sureste. Para la periferia, el Valle de San Fernando, Glendale, South Coast y Orange County ("Los Angeles 1965: Market and Media" 1965, 15, M12).

con el resultado de más de 76 ciudades incorporadas ("Los Ángeles 1965: Market and Media" 1965: M3).[28]

El tema de la incorporación a la ciudad *versus* la suburbanización muestra las múltiples formas de racismo que configuraban la región. Para algunos, mudarse a los suburbios solo significaba aprovechar las oportunidades derivadas de su piel blanca. Mientras esta oportunidad deriva del racismo institucionalizado, la incorporación es quizá una acción más consciente y deliberada para mantener los privilegios (con frecuencia mediante el valor de la propiedad). En Torrance, por ejemplo, una campaña liderada por el Congress on Racial Equality (CORE), un grupo de derechos civiles, fue ferozmente resistida por los blancos. La oposición blanca incluía desde desfiles con nazis y el Klu Klux Klan hasta propietarios blancos que colocaban banderas estadounidenses y carteles en sus jardines con la leyenda: "Sin derechos de propiedad no hay derechos humanos" (Weeks, 1963). Aunque la referencia a los derechos de propiedad pueda parecer engañosa, es bastante reveladora en el sentido de que pone de manifiesto la necesidad de preservar la blanquitud para proteger la propia inversión y una determinada calidad de vida. Lo significativo no es que algunos blancos se nieguen a vivir entre no blancos, sino hasta qué punto el estatus social y la calidad de vida anhelada parten de la homogeneidad de la blanquitud.

> Los suburbanos se blindan en efecto ante aquellos que son distintos después de llegar (a los suburbios); sin embargo, esto sugiere que la mayor fuerza que empuja su migración es el deseo por escapar de la mezcla racial y de clases. En Estados Unidos, la *movilidad y el estatus social dependen de poder vivir lejos de los grupos considerados racial y económicamente inferiores* […] Por tanto, no se trata simplemente del racismo que ejercen los individuos, sino también de la amenaza colectiva que las diferencias de raza y clase suponen a la propiedad de vivienda y a la posición social

28 Un impulso importante para este auge de la incorporación fue la comunidad planeada de Lakewood, que fue pionera en una forma contractual del Gobierno municipal (Brill, 1996: 98). Muchas comunidades imitaron este plan, un proceso que ha llegado a conocerse como la "lakewoodización" del sur de California (Davis, 1992: 166).

> que conduce a los suburbios a mantener su territorio segregado (Sharp y Wallock, 1994: 9. Subrayado propio).

La cita pone énfasis en el vínculo entre las acciones individuales y las estructuras sociales. Mientras algunos tuvieron sin duda intenciones maliciosas, otros no. Sin embargo, para poder conservar y aprovechar completamente el privilegio asociado con la blanquitud, individuos en apariencia bien intencionados responden a las fuerzas del mercado y a las estructuras sociales en formas que refuerzan las jerarquías racistas.

Este proceso resalta no solo la espacialidad del racismo, sino también el hecho de que el espacio constituye un recurso en la producción del privilegio blanco. De hecho, los barrios no son simplemente grupos de individuos, casas y comercio. Son *constelaciones de oportunidades* que generan consecuencias importantes tanto para la población beneficiaria como para la no beneficiaria. Aunque los blancos debían esforzarse cada vez más para conseguirlos, los espacios blancos relativamente homogéneos son necesarios para beneficiarse de forma plena de la blanquitud (Frankenberg, 1993).

A partir de la década de los cincuenta, el éxodo urbano fue impulsado por la reubicación de industrias clave y de los servicios del gobierno. Empezando con Northrop, Hughes y Lockheed, empresas aeroespaciales que abandonaron el centro de Los Ángeles de golpe y crearon nuevos conglomerados industriales (Scott, 1996b; Lockheed Aircraft Corporation, 1953). A consecuencia, los empleos bien remunerados en la industria de la defensa se mudaron a la periferia de Los Ángeles (Law *et al*., 1993), y se incrementó la polarización racial y económica. Existía una relación muy estrecha entre la industria de defensa y los trabajadores blancos. Estos siguieron a la industria, que se mudó a zonas más propicias para los blancos. Por ejemplo, un estudio sobre el mercado laboral describe a Fullerton como una ciudad que estaba experimentando una "expansión significativa de las industrias relativas al proyecto de misiles" (California Dept. of Employment, 1960) y que tenía una fuerza de trabajo mayormente "blanca nativa" (California Dept. of Employment, 1952).

Muchos factores contribuyeron a esta descentralización industrial y urbana. Además del crecimiento poblacional, los nuevos métodos de producción requerían

terrenos más grandes, cada vez más difíciles de encontrar en Los Ángeles. De hecho, 76 % de la inversión de capital en Los Ángeles durante 1955 se destinó a expandir negocios ya existentes (Banks, 1956: 63). Además, había un anhelo por escapar de la aglomeración y las preocupaciones por la calidad de vida se incrementaron después de los disturbios de Watts (1965). Así, se construyeron nuevas comunidades a lo largo de la periferia de Los Ángeles, incluyendo el Valle de San Fernando, la Bahía Sur y Orange County (Kling *et al*., 1993: 3[29]; Scott, 1990, cap. 9). Entre 1960 y 1965, el condado de Los Ángeles experimentó un ritmo de crecimiento poblacional de 21.4% ("Los Ángeles 1965: Market and Media", 1965: M14). A pesar del crecimiento excepcional de Orange County, relativamente pocas personas de color se mudaron allí. Mientras que 19.2% de la población de Los Ángeles era no blanca en 1960, en Orange County no lo era solo 8.8 % (L.A. Chamber of Commerce, 1964).

Además de vivienda accesible y empleos bien remunerados, los angelinos blancos fueron cautivados por nuevas comunidades, atractivas y segregadas, como Irvine, la comunidad planeada por excelencia. El desarrollador, la Irvine Company, consideró que viviendas demasiado accesibles e integradas reducirían el valor de la propiedad y disuadirían a los compradores. Un funcionario explicó que un anuncio multirracial "asustaría a toda persona blanca que yo tuviera la más mínima esperanza de alcanzar" (Schiesl, 1995: 68).

Ya para la década de los setenta, la disminución del racismo explícito y una economía fuerte permitió a las personas de color disfrutar de más opciones de vivienda. El Valle de San Gabriel se convirtió en la ruta de movilidad ascendente para los chicanos, y los americanos-asiáticos se dispersaron de manera progresiva por toda la región. A la postre, la aplicación de leyes de derechos civiles permitió a los negros mudarse más allá del centro y el sur de Los Ángeles.

Patrones contemporáneos

Debido a los 150 años de racismo y a los recientes cambios sociales y económicos, el sur de California sigue siendo un área altamente segregada, a pesar

29 N. de T. Esta cita presenta, una inconsistencia de fecha con relación a su referencia correspondiente. Es inconsistencia de origen.

de la reducción de formas explícitas de racismo. Tres factores interrelacionados ayudan a explicar por qué el centro de la ciudad sigue siendo un lugar no blanco, y los blancos continúan dominando en la periferia: la inmigración, la movilidad residencial y la reestructuración económica. Estos factores también ayudan a explicar por qué los latinos, en particular, están expuestos en su mayor parte a la contaminación industrial.

La inmigración ha afectado dramáticamente tanto la economía como los patrones de residencia de la región. Entre 1970 y 1990, la población asiática de Los Ángeles aumentó 451% (Cheng y Yang, 1996: 308), mientras que entre 1980-1990 la población latina pasó de dos a más de tres millones (Morrison y Lowry, 1994: 28). Si bien los recién llegados se asentaron a lo largo de la región, muchos se agruparon en el este, centro y sur de Los Ángeles. Al mismo tiempo, los afroamericanos, aunque todavía muy concentrados en el sur de la ciudad, se han mudado al este hacia el "imperio del interior", e incluso regresan al sur (Johnson y Roseman, 1990). Los inmigrantes se han mudado a estos espacios negros y de gente morena por ser económicos y accesibles. Los inmigrantes no se asientan en cualquier lugar. Sus decisiones se fundamentan en la geografía de los regímenes raciales del pasado. De esta forma, el centro de Los Ángeles sigue siendo un espacio no blanco (Allen y Turner, 1997: 46). Este crecimiento se asocia a la pérdida de 352 000 blancos entre 1980 y 1990 (Sabagh y Bozorgmehr, 1996: 86). Los blancos no solo se mudan a Orange County (en particular populares son las comunidades más sureñas, donde los blancos constituyen a veces hasta 90% de la población), sino que el movimiento de los angelinos blancos también se ha ampliado hacia San Diego, el centro de California y a lo largo del oeste (Frey y Liaw, 1998). Incluso las comunidades blancas "reticentes" sienten que tienen los días contados. De acuerdo con un residente de Lakewood: "En mi cuadra ya tengo tres (familias) negras […] y bueno, ya sabes el problema con los negros, tienen amigos y tienen visitas. Ese es el problema. No podemos animar a nuestra gente a quedarse si esto sigue así. Nuestro patrimonio inmobiliario se ha mantenido bastante sólido, pero ya no se puede convencer a ciertas personas de quedarse" (en Brill, 1996: 110).

La composición de Orange County, sobre todo en las zonas internas, ha cambiado de forma considerable con el incremento de latinos y personas provenientes de Asia y las islas del Pacífico. Sin embargo, los negros solo constituyen 1.8 % de la población (Roseman y Lee, 1998: 208). El resultado final de todos estos cambios es que, aunque se pueden encontrar personas de color a lo largo de la región, esta población se concentra en los suburbios más antiguos, el este del Valle de San Fernando y el Valle de San Gabriel.[30] El centro de Los Ángeles sigue siendo casi completamente no blanco, y los blancos continúan concentrándose en la periferia.

Como sugieren las Figuras 2-4, muchas de las industrias y los usos de suelo asociados a los riesgos ambientales se agrupan en el centro de Los Ángeles, y, en menor medida, a lo largo de los corredores industriales. Tanto los negros como los latinos están desproporcionalmente expuestos, pero por razones distintas. La población más segregada, los angelinos negros fueron confinados al sur de Los Ángeles desde la década de los veinte (De Graff, 1970). Aunque muchos negros se han ido, el sur de la ciudad aún lo habitan los negros (Allen y Turner, 1997: 62), y contiene fragmentos de un antiguo corredor industrial. A pesar de que en ellas solo se contrataba a negros de forma intermitente, el sur de Los Ángeles albergó muchas industrias fordistas, y la mayoría de ellas se fueron en los años setenta y ochenta (Oliver *et al*., 1993: 122). Este "cinturón de óxido" no solo representa numerosos riesgos ambientales, sino que, al ser un área políticamente débil y orientada hacia la industria, atrae proyectos como los incineradores y el Pacific Pipeline (Aspen Environmental Group, 1993). Por tanto, la exposición de los negros a los peligros ambientales se debe en gran medida al severo confinamiento espacial y a la práctica histórica de localizar usos de suelo peligrosos en zonas negras.

En cambio, la exposición de los latinos se debe más a su ocupación como mano de obra barata en la división racializada del trabajo y a la relación histórica entre el barrio y la industria. Los latinos siempre han vivido cerca de áreas industriales, pero, a diferencia de los negros, por momentos

30 Esto concuerda con estudios que sugieren que, a pesar de la presencia creciente de personas de color en los suburbios, siguen siendo segregados y tienden a vivir en los suburbios más marginales (Phelan y Schneider, 1996).

han sido contratados en grandes números (Morales y Ong, 1993; Ong y Blumenberg, 1993). La exposición contemporánea de los latinos no puede comprenderse más allá de los cambios en la industria y la inmigración. Durante los últimos veinte años, la región ha atravesado simultáneamente por un declive y por la expansión industrial (Soja, 1989: 200). Mientras los sectores de finanzas y los servicios han crecido de manera dramática, la manufactura disminuyó en Los Ángeles durante los años ochenta. Sin embargo, durante los noventa, se produjo una reindustrialización selectiva (Scott, 1996a) con industrias de alta tecnología y mano de obra latina con bajos salarios. En consecuencia, los latinos viven cerca de la industria, ya que ambos se concentran en el centro de Los Ángeles y en los corredores industriales, y están expuestos a riesgos en el trabajo (Ong y Blumenberg, 1993). Por tanto, su exposición depende de su clase social y de su condición de inmigrantes, así como de su posición racial. Como latinos, viven donde las personas negras y morenas han vivido de forma tradicional o en espacios abandonados por la clase obrera blanca.

Los riesgos ambientales se concentran en el centro de Los Ángeles (incluyendo los suburbios del interior) por varias causas distintas. En primer lugar, porque una porción significativa de estas comunidades está zonificada como industrial, por lo que la industria continúa ubicándose allí (Cordoba Corp., 1987: 22). Pero debido a la pobreza del centro de Los Ángeles, a su fragmentación territorial y a la existencia de servicios deficientes, se mudan allá muy pocas empresas importantes y bien financiadas de sectores en crecimiento.[31] En su lugar, las pequeñas empresas contaminantes y actividades peligrosas a gran escala, como los incineradores, se establecen en estas zonas, mientras "las industrias más limpias evitan ubicarse en el área debido a la contaminación tóxica" (L.A. Design Action Planning Team, 1990: 12). Según un oficial de Paramount, un suburbio del interior, "nosotros proveemos un lugar para la industria que nadie quiere" (Carbajal, en Flanigan, 1999). Scott ha señalado cómo las industrias de baja tecnología y con gran demanda de mano de obra se concentran en el centro; las industrias metalúrgicas y de maquinaria en las antiguas

31 De hecho, el lado este, sur-central y la esquina noreste del Valle de San Fernando han sido designados como zonas de emprendimiento, con la esperanza de atraer desarrollo económico.

zonas industriales a lo largo de la región, incluyendo el este del Valle de San Fernando, South Central y el norte de Orange County; mientras que las industrias de alta tecnología se sitúan en la periferia (1996a: 220-221; véase también Kaplan, 1998).

Consideremos los distritos de planeación del este y el suroeste de la ciudad de Los Ángeles. En ambos casos, 20 % de la tierra es de uso industrial (City of Los Ángeles Dept. of City Planning, 1988: 9; Garrow *et al*., 1987: 54). No sorprende que estas dos comunidades fueran consideradas para el establecimiento de incineradores en la década de los ochenta. La ciudad de Los Ángeles propuso colocar un incinerador de residuos en South Central, pero un grupo de mujeres, en su mayoría afroamericanas, agrupadas en Concerned Citizens of South Central, resistió el proyecto con éxito. En el segundo caso, la ciudad de Vernon, cerca de Boyle Heights, propuso instalar un riesgoso incinerador de residuos. Esta vez, la ciudad de Los Ángeles ayudó a Mothers of East L.A. a revocar el proyecto (Blumberg y Gottlieb, 1989).

Los usos conflictivos del suelo también son un serio problema que agrava los potenciales riesgos ambientales. Un documento de planeación describía al lado este conformado por

> … casas unifamiliares, pequeñas y más antiguas situadas cerca o entre edificios comerciales e industriales grandes […] El ruido, la suciedad, el tráfico pesado de camiones y tráileres también disminuye seriamente la calidad de vida de los residentes cercanos. Las vistas desde las viviendas hacia los muelles de carga, desguaces y talleres de reparación de automóviles y maquinaria pesada, no ofrecen las comodidades tradicionalmente asociadas a la vida residencial (Garrow *et al*., 1987: 54).

Más allá de lo estético, dichos usos de suelo representan una severa amenaza para los residentes. Debido a la falta de áreas de amortiguamiento y a la peligrosidad de la industria, se han producido evacuaciones masivas, contaminaciones en escuelas (Frammolino, 1999), explosiones (Sahagun, 1989), agregaciones de casos potenciales de cáncer (Gold, 1999) y muertes de trabajadores (Malnic y Ramos, 1997). Las comunidades suburbanas

más nuevas no tienen la misma concentración de actividades industriales peligrosas y disfrutan de una zonificación y una normatividad sobre el uso del suelo más eficaces. En general, simplemente existen menos focos de contaminación a lo largo de la costa (Figuras 2-4). Con excepción del puerto, las comunidades costeras son más limpias (y más blancas) que el centro de la ciudad. Más allá de que las empresas mejor capitalizadas se localizan en los suburbios y que estas suelen tener la mejor tecnología disponible, la brisa en la costa arrastra la contaminación hacia el interior y así limpia los suburbios costeros.

En resumen, observando a la región en su conjunto, es claro que las personas de color se hallan expuestas de forma desproporcionada a una serie particular de riesgos ambientales. Estos patrones no son producto de una sola decisión o una acción particular. Al contrario, son resultado del desarrollo urbano a lo largo de 150 años en una sociedad altamente racializada.

Conclusión

He argumentado que las comprensiones limitadas del racismo caracterizan la literatura sobre el racismo ambiental. En particular, el énfasis en la localización, la intencionalidad y la escala han contribuido a conceptualizar el racismo y el espacio como objetos discretos, más que como relaciones sociales. Estas interpretaciones dominantes son problemáticas porque nos impiden comprender cómo el racismo moldea los lugares y las relaciones entre lugares, lo cual limita nuestra capacidad para identificar el racismo ambiental. He intentado cuestionar este enfoque al emplear la noción de privilegio blanco, que ofrece una comprensión más estructural y especializada del racismo. Este cambio implica reconocer que existen múltiples formas del racismo, incluyendo formas menos conscientes que no se caracterizan por la intención maliciosa ni por la hostilidad. El privilegio blanco nos permite ver cómo el racismo ambiental se ha producido no solo afectando conscientemente a las personas de color (como en los casos de los incineradores), sino mediante procesos más amplios de desarrollo urbano, incluyendo la fuga blanca, donde los blancos tratan de obtener el máximo beneficio de su blanquitud.

En las áreas urbanas, las explicaciones sobre la inequidad ambiental deben considerar cuidadosamente los patrones residenciales, los usos de suelo y el desarrollo industrial. La historia de la suburbanización revela que, aunque muchas fuerzas contribuyeron a la descentralización, esta ha sido en general un proceso excluyente. Además, el Estado ha desempeñado un papel central para crear tales oportunidades, elecciones y paisajes. Pese a que en Los Ángeles los no blancos siempre han vivido cerca de la industria, recientemente las personas de color se han mudado hacia los suburbios, para ocupar lo que una vez fueron suburbios industriales blancos. Con el tiempo, estos suburbios industriales se han vuelto parte del centro de la ciudad, y cada vez con mayor frecuencia son ocupados por personas de color. Así, el centro de Los Ángeles, con su concentración de riesgos ambientales, se mantiene como un espacio no blanco. En contraste, los blancos continúan moviéndose hacia la periferia, aún relativamente más limpia. Estos patrones se desarrollaron durante un siglo y siguen influyendo en el presente, lo que ilustra cómo las variadas formas del racismo moldean nuestros paisajes.

Este trabajo plantea una serie de cuestiones políticas y académicas. Desde una perspectiva política, he defendido la necesidad de prestar más atención a las zonas industriales y la concentración de contaminantes, en lugar de enfocarse solo en los procesos de localización y las edificaciones particulares. Mientras las últimas son claramente importantes, en términos de la contaminación futura, la mayor parte de la contaminación industrial no implica nuevos espacios, sino más bien es resultado de instalaciones, usos del suelo y zonificaciones previas.

La investigación sobre el racismo ambiental puede fortalecerse. Es esencial que los investigadores sitúen su trabajo en términos de una dialéctica socioespacial más amplia. Esto no solo mostraría el contexto geográfico e histórico donde se desarrollaron estos patrones, sino también nos ayudaría a apreciar hasta qué punto los lugares son moldeados por las diversas formas de racismo. En ese sentido, el hecho de que muchos geógrafos sean reacios a transitar estos caminos en la investigación subraya la necesidad de una mayor apertura en nuestra disciplina y las limitaciones de la especialización. Como una disciplina íntimamente vinculada tanto a las

relaciones humano-ambientales como al estudio del espacio, debemos estar a la vanguardia para contribuir con nuevas visiones teóricas, empíricas y herramientas técnicas para la justicia ambiental.

El tema del racismo plantea problemas tanto académicos como políticos. Creo que, como geógrafos, necesitamos diversificar y profundizar nuestro enfoque de estudio de la desigualdad racial. Nuestro énfasis tradicional se halla en el mapeo y el conteo, pero necesita complementarse con una investigación que busque comprender lo que la raza significa para las personas y cómo el racismo moldea vidas y lugares. Por ejemplo, dentro del campo del racismo ambiental, una pregunta clave que no ha sido seriamente tratada es la referente a la exposición diferencial. En otras palabras, ¿cómo las diferentes experiencias e historias de racismo pueden dar lugar a distintas geografías de exposición, por ejemplo, entre la nación shoshone, los negros rurales del sur y una comunidad urbana asiático-americana en la bahía de San Francisco? Estas preguntas no solo son importantes en sí mismas, sino que también ayudarían a la geografía a construir puentes con otras disciplinas, como los estudios étnicos.

Pero la cuestión del racismo dentro de la disciplina va más allá de la investigación. Como ya he mostrado, nuestro acercamiento al tema, desafortunadamente, dice mucho acerca de la postura política de nuestra disciplina. ¿Cómo debemos entender una literatura que pretende tratar la cuestión del racismo, pero que al mismo tiempo se distancia de las comprensiones académicas fundamentales sobre el racismo? ¿Por qué tantos investigadores se aferran a una conceptualización tan estrecha del racismo? ¿Cuáles son las consecuencias de este acercamiento en términos de nuestra investigación, enseñanza y eficacia política? Quizá es necesario cuestionarse seriamente sobre el tema del racismo. Por decir lo menos, espero que este trabajo demuestre cómo los investigadores por sí mismos contribuyen a la reproducción de discursos más amplios y a las conceptualizaciones de la raza, con independencia de sus motivos. El punto no es señalar culpables, sino tomar conciencia de las consecuencias políticas y morales de nuestros actos.

Reconocimientos

Quiero agradecer a Hallie Krinski y Angel Gomez por su asistencia en la investigación, a Clay Kraft por sus destrezas cartográficas, y a Jim Sadd por compartir sus datos sobre riesgos. Muchos amigos y colegas han comentado los distintos borradores de este trabajo o hecho sugerencias valiosas: Dionne Espinoza, Melissa Gilbert, Greg Hise, Jim Lee, George Lipsitz, Bill Lynn, Mike Murashige, Leland Saito y Jennifer Wolch. Quiero agradecer de manera especial a los cinco dictaminadores anónimos por sus comentarios. Soy la única responsable de las deficiencias del trabajo. Diferentes versiones de este trabajo fueron presentadas en la Universidad de Minnesota, la Universidad de Washington, la Universidad Temple y la Universidad de California en San Diego y Santa Cruz.

Referencias

Adeola, F. 1994. Environmental hazards, health, and racial inequity in hazardous waste distribution. *Environment & Behavior*, *26*, 99-126.

Allen, J. y E. Turner. 1997. *The ethnic quilt: population diversity in Southern California*. Center for Geographical Studies, California State University Northridge.

Almaguer, T. 1994. *Racial fault lines: the historical origins of white supremacy in California*. University of California Press.

Anderson, K. 1987. The idea of Chinatown: the power of place and institutional practice in the making of a racial category. *Annals of the Association of American Geographers*, *77*, 580-598.

Anderson, S. 1996. A city called heaven. En A. Scott y E. Soja (eds.). *The city* (336-364). University of California Press.

Anderton, D., A. Anderson, P. Rossi, J. Oakes, M. Fraser, E. Weber y E. Calabrese. 1994a. Hazardous waste facilities: "environmental equity" issues in metropolitan areas. *Evaluation Review*, 18, 123-140.

Anderton, D., A. Anderson, J. Oakes y M. Fraser. 1994b. Environmental equity: the demographics of dumping. *Demography*, *31*, 229-248.

Armour, J. 1997. *Negrophobia and reasonable racism*. New York University Press.

Arnold, C. 1998. Planning milagros: environmental justice and land use regulation. *Denver University Law Review*, *76*(1), 1-153.

Aspen Environmental Group. 1993. *Pacific Pipeline project: draft environmental impact report, executive summary*. California Public Utilities Commission.

Avila, E. 1998. The folklore of the freeway: space, culture, and identity in postwar Los Angeles. *Aztlan*, *23*(1), 15-32.

Babcock, R. y F. Bosselman. 1973. *Exclusionary zoning*. Praeger Publishers.

Baden, B. y D. Coursey. 1997. *The locality of waste sites within the city of Chicago: a demographic, social and economic analysis. Working paper series 97-2*. Irving B. Harris Graduate School of Public Policy Studies, University of Chicago.

Banks, F. 1956. Industry puts up $190,000,000. *Midwinter: Los Angeles Times 75th Anniversary*, 3 de enero, parte 1, 63-64.

Bean v. Southwestern Waste Management Corporation. 1979. 482 F. Supp. 673. S.D. Tex.

Been, V. 1993. What's fairness got to do with it? Environmental justice and the siting of locally undesirable land uses. *Cornell Law Review*, *78*, 1001-1085.

Been, V. 1994. Locally undesirable land uses in minority neighborhoods: disproportionate siting or market dynamics? *Yale Law Journal*, *103*, 1383-1422.

Been, V. 1995. Analyzing evidence of environmental justice. *Journal of Land Use and Environmental Law*, *11*(1), 1-36.

Berry, B. 1977. *The social burdens of environmental pollution: a comparative metropolitan data source*. Ballinger Publications.

Blumberg, L. y B. Gottlieb. 1989. Saying no to mass burn. *Environmental Action*, enero-febrero, 28-30.

Boer, J., J. Sadd, M. Pastor y L. Snyder. 1997. Is there environmental racism? The demographics of hazardous waste in Los Angeles county". *Social Science Quarterly*, *78*, 793-810.

Boerner, C. y T. Lambert. 1994. *Environmental justice? Policy study 21*. Center for the Study of American Business.

Bowden, T. y D. Mayborn,. 1939. *Confidentiality report of a survey in metropolitan Los Angeles, California. For the Division of Research and Statistics, Home Owners Loan Corporatio*n. Records Relating to the City Survey Files, 1935-40, Record Group 95, Box 101. National Archives and Records Administration, College Park, MD.

Bowen, W., M. Salling, K. Haynes y E. Cyran. 1995. Toward environmental justice: spatial equity in Ohio and Cleveland. *Annals of the Association of American Geographers*, *85*, 641-663.

Brill, A. 1996. Lakewood, California "Tomorrowland" at 40. En M. Dear, E. Schockman y G. Hise (coords.). *Rethinking Los Angeles* (97-112). Sage.

Brodkin, K. 1998. *How Jews became white folks*. Rutgers University Press.

Bullard, R. 1996. Environmental Justice: it's more than waste facility siting. *Social Science Quarterly*, *77*, 493-499.

Bullard, R. 1994. Overcoming racism in environmental decisionmaking. *Environment*, *36*(4), 10-20, 39-44.

Bullard, R. 1990. *Dumping in Dixie*. Westview Press.

Burke, L. 1993. *Environmental equity in Los Angeles* [tesis de maestría, Department of Geography, University of California, Santa Barbara].

California Department of Employment, Research and Statistics Division. 1952. *Community labor market surveys*. California Historical Society, LA Area Chamber of Commerce Collection, Box 71. University of Southern California.

California Department of Employment, Research and Statistics Division. 1960. *Community labor market surveys*. California Historical Society, Los Angeles (LA) Area Chamber of Commerce Collection, Special Collections, Box 71. University of Southern California.

Cheng, L. y P. Yang. 1996. Asians: the model minority deconstructed. En R. Waldinger y M. Bozorgmehr (coords.). *Ethnic Los Angeles* (305-344). Russell Sage Foundation.

City of Los Angeles Department of City Planning. 1988. *Southeast Los Angeles district plan*.

Cohan, C. 1956. *Southland building at New Peak*. Los Angeles Times 75th Anniversary. January 3, 44-45.

Cohen, P. 1992. "It's racism what dunnit": Hidden narratives in theories of racism. En J. Donald y A. Rattansi (coords.). *Race, culture and difference* (62-103). Sage.

Colten, C. 1986. Industrial wastes in Southeast Chicago: production and disposal, 1870-1970. *Environmental Review*, *10*, 93-106.

Cordoba Corp. 1987. *Final application, eastside employment incentive area*. Community Development Department, City of Los Angeles.

Crenshaw, K., N. Gotanda, G. Peller y K. Thomas. 1995. *Critical race theory*. New Press.

Cutter, S. 1994. the burdens of toxic risks: are they fair? *B & E Review* (octubre-diciembre), 3-7.

Cutter, S. 1995. Race, class and environmental justice. *Progress in Human Geography*, *19*, 107-118.

Cutter, S. y W. Solecki. 1996. Setting environmental justice in space and place: acute and chronic airborne toxic releases in the Southeastern U.S. *Urban Geography*, *17*, 380-399.

Cutter, S. y M. Tiefenbacher. 1991. Chemical hazards in urban America. *Urban Geography*, *12*, 417-430.

Davis, M. 1992. *City of quartz*. Vintage Books.

De Graff, L. 1970. The city of black angels: emergence of the Los Angeles ghetto, 1890-1930. *Pacific Historical Review*, *39*, 323-352.

Dear, M. y S. Flusty. 1998. Postmodern urbanism. *Annals of the Association of American Geographers*, *88*, 50-72.

Delgado, R. 1995. *The Rodrigo chronicles*. New York University Press.

Devine, P. 1989. Stereotypes and prejudice: their automatic and controlled components. *Personality and Social Psychology*, *56*, 5-18.

Doti, L. y L. Schweikart. 1989. Financing the postwar housing boom in Phoenix and Los Angeles, 1945-1960. *Pacific Historical Review*, *58*, 173-191.

East Bibb Twigs Neighborhood Assn. v. Macon-Bibb County Planning and Zoning Commission. 1989. 888 F. 2d 1573 (11th Cir.).

Ebner, M. 1987. Re-reading suburban America: urban population deconcentration, 1810-1980. En H. Gillette, Jr., y Z. Miller (coords.). *American urbanism* (227-242). Greenwood Press.

Edsall, T. y M. Edsall. 1991. *Chain reaction*. W. W. Norton.

Fanon, F. 1967. *Black skins, white masks*. Grove Press.

Fishman, R. 1987. *Bourgeois utopias*. Basic Books.

Flanigan, J. 1999. Downey takes lead to revive gateway cities. *Los Angeles Times*, 16 de junio, C1, C4.

Fogelson, R. 1993. *The fragmented metropolis: Los Angeles, 1850-1930*. University of California Press.

Foner, E. 1974. *Organized labor and the black worker, 1619-1973*. International.

Frammolino, R. 1999. Report lists L.A. schools that pose toxic risks. *Los Angeles Times*, 26 de junio, B1, B5.

Frankenberg, R. 1993. *White women, race matters*. University of Minnesota.

Fredrickson, G. 1981. *White supremacy: a comparative study of race in American and South African history.* Oxford University Press.

Frey, W. y K. Liaw. 1998. Immigrant concentration and domestic migrant dispersal: is movement to nonmetropolitan areas "white flight"? *The Professional Geographer*, *50*, 215-232.

Garreau, J. 1991. *Edge city: life on the new frontier.* Doubleday.

Garrow, P., J. Lau y S. Loong. 1987. *Urban ecology and design for the eastside employment incentive area*. Department of City Planning.

Gilmore, R. 1998. "Globalization and U.S. prison growth: from military keynesianism to post keynesian militarism. *Race & Class*, *40*(2-3), 171-188.

Gold, M. 1999. A school, factories and plenty of fear. *Los Angeles Times*, 27 de febrero, A1, A20, A21.

Goldberg, T. 1993. *Racist culture*. Blackwell.

Goldman, B. 1996. What is the future of environmental justice? *Antipode*, *28*, 122-141.

Gottdiener, M. y M. Kephart. 1995. The multinucleated metropolitan region: a comparative analysis. En R. Kling, S. Olin y M. Poster (coords.). *Postsuburban California* (31-54). University of California Press.

Guhathakurta, S. y M. Wichert. 1998. Who pays for growth in the city of Phoenix: an equity based perspective on suburbanization. *Urban Affairs Review*, *33*, 813-838.

Hamilton, J. 1995. Testing for environmental racism: prejudice, profits, political power?". *Journal of Policy Analysis and Management*, *14*, 107-132.

Harris, C. 1993. Whiteness as property. *Harvard Law Review*, *106*, 1709-1791.

Harvey, D. 1985. *The urbanization of capital*. Johns Hopkins University Press.

Heiman, M. 1990. From "Not in my backyard!" to "not in anybody's backyard!": grassroots challenges to hazardous waste facility siting. *American Planning Association Journal*, *56*, 359-362.

Hird, J. 1993. Environmental policy and equity: the case of Superfund. *Journal of Policy Analysis and Management*, *12*, 323-343.

Hise, G. 2000. Constructing "nature's workshop": industrial districts and urban expansion in Southern California, 1910-1950. *Journal of Historical Geography*, *24*, 74-92.

Hise, G. 1998. *Magnetic Los Angeles*. Johns Hopkins University Press.

Hise, G. 1993. Home building and industrial decentralization in Los Angeles: the roots of the postwar urban region. *Journal of Urban History*, *19*(2), 95-125.

Horne, G. 1995. *Fire this time: the Watts uprising and the 1960s*. University Press of Virginia.

Hurley, A. 1988. The social biases of environmental change in Gary, Indiana, 1945-1980. *Environmental Review*, *12*(4), 1-19.

Ignatiev, N. 1995. *How the Irish became white*. Routledge.

Jackson, K. 1980. Race, ethnicity, and real estate appraisal: the home owners loan corporation and the federal housing administration. *Journal of Urban History*, *4*, 419-452.

Jackson, P. y J. Penrose. 1994. *Constructions of race, place, and nation*. University of Minnesota.

Johnson, J. y C. Roseman. 1990. Increasing black out migration from Los Angeles: the role of household dynamics and kinship systems. *Annals of the Association of American Geographers*, *80*, 205-222.

Kaplan, K. 1998. Tech coast: entrepreneurs and officials seek to ride an innovation wave to rival that of Silicon Valley. *Los Angeles Times*, 9 de marzo, D1, D12.

Kay, J. 1994. California's endangered communities of color. En R. Bullard (coord.). *Unequal protection* (pp. 155-188). Sierra Club Books.

Kirschenman, J. y K. Neckerman. 1991. We'd love to hire them, but . . . the meaning of race for employers. En C. Jenks y P. Peterson (coords.). *The urban underclass* (p203-232). Brookings Institution.

Kling, R., S. Olin y M. Poster. 1995. The emergence of postsuburbia: an introduction. En R. Kling, S. Olin y M. Poster (coords.). *Postsuburban California* (1-30). University of California Press.

Kobayashi, A. L. y Peake. 1994. Unnatural discourse: "race" and gender in geography. *Gender, Place & Culture*, *1*, 225-244.

Krieg, E. 1995. A socio-historical interpretation of toxic waste sites: the case of Greater Boston. *American Journal of Economics and Sociology*, *54*, 1-14.

Law, R., J. Wolch y L. Takahashi. 1993. Defenseless territory: workers, communities, and the decline of military production in Los Angeles. *Environment and Planning C: Government and Policy*, *11*, 291-315.

Lawrence, C. 1987. The id, the ego and equal protection: reckoning with unconscious racism. *Stanford Law Review*, *39*, 317-388.

Lester, J., D. Allen y D. Milburn-Lauer. 1994. Race, class, and environmental quality: an examination of environmental racism in the American states [ponencia en *Annual Meeting of the Western Political Science Association*, Albuquerque].

Lipsitz, G. 1995. The possessive investment in whiteness: racialized social democracy and the "white" problem in American studies. *American Quarterly*, *47*, 369-387.

Lipsitz, G. 1998. *The possessive investment in whiteness*. Temple University Press.

Lockheed Aircraft Corporation. 1953. *168 Communities Contribute to Lockheed Leadership*. The Los Angeles Times Annual Midwinter, January 2. California Historical Society, L.A. Area Chamber of Commerce Collection, Box 118. University of Southern California.

Los Angeles Central Manufacturing District. 1923. Central Manufacturing District of Los Angeles. California Historical Society, LA

Area Chamber of Commerce Collection, University of Southern California.

Los Angeles Chamber of Commerce. 1925. *Industrial communities of Los Angeles metropolitan area*. California Historical Society, L.A. Area Chamber of Commerce Collection, Special Collections, University of Southern California.

Los Angeles Chamber of Commerce. 1926. *Facts about industrial Los Angeles: nature's workshop.* California Historical Society, L.A. Area Chamber of Commerce Collection, Special Collections, University of Southern California.

Los Angeles Chamber of Commerce. 1929. *General industrial report of Los Angeles county, CA and surrounding communities*. California Historical Society, L.A. Area Chamber of Commerce Collection, Special Collections, University of Southern California.

Los Angeles Chamber of Commerce, Industrial Department. 1934. *General industrial report of Los Angeles county, California*. California Historical Society, L.A. Area Chamber of Commerce Collection, Special Collections, University of Southern California.

Los Angeles Chamber of Commerce. 1964. *The Researcher: 1964 Statistical Summary*. California Historical Society, LA Area Chamber of Commerce Collection, Box 64. University of Southern California.

Los Angeles Central Manufacturing District. 1923. *Central Manufacturing District of Los Angeles*. California Historical Society, LA Area Chamber of Commerce Collection, University of Southern California.

Los Angeles Design Action Planning Team. 1990. *Boyle Heights, Los Angeles.* Planning Department, Box C1518, Los Angeles City Archive.

Los Angeles 1965: Market and Media. 1965. *Los Angeles Times. California Historical Society, LA Area Chamber of Commerce Collection, Box 118.* University of Southern California.

Malnic, E. y G. Ramos. 1997. Explosion kills 4, injures 25 at L.A. Toy factory. *Los Angeles Times*, 6 de noviembre, A1, A30, A31.

Massey, D. 1994. *Space, place, and gender.* University of Minnesota Press.

Massey, D. y N. Denton. 1993. *American apartheid: segregation and the making of the underclass*. Harvard University Press.

McGurty, E. 1995. *The construction of environmental justice: Warren County North Carolina* [tesis de doctorado, University of Illinois, Urbana-Champaign].

Miller, G. 1981. *Cities by contract: the politics of municipal incorporation*. MIT Press.

Mohai, P. y B. Bryant. 1992. Environmental racism: reviewing the evidence. En B. Bryant y P. Mohai (coords.). *Race and the incidence of environmental hazards* (163-246). Westview Press.

Morales, R. y P. Ong. 1993. The illusion of progress: Latinos in Los Angeles. En R. Morales y F. Bonilla (coords.). *Latinos in a changing economy* (pp. 55-84). Sage.

Morrison, P. y R. Lowry. 1994. A riot of color: the demographic setting. En M. Baldassare (coord.). *The Los Angeles riots* (19-46). Westview Press.

Myrdal, G. 1944. *An American dilemma: the negro problem and modern democracy*. Harper and Row.

Napton, M. y F. Day. 1992. Polluted neighborhoods in Texas, who lives there? *Environment & Behavior*, *24*, 508-526.

Newton, M. 1998. L.A. to get $3.3 million for pollution cleanup. *Los Angeles Times*, 18 de marzo, B1, B8.

Oliver, M. y T. Shapiro. 1995. *Black wealth, white wealth*. Routledge.

Oliver, M., J. Johnson y W. Farrell. 1993. Anatomy of a rebellion: a political-economic analysis. En D. R. Gooding-Williams (coord.). *Reading Rodney King, reading urban uprising* (117-141). Routledge.

Omi, M. 1992. Shifting the blame: racial ideology and politics in the post-civil rights era. *Critical Sociology*, *18*, 77-98.

Omi, M. y H. Winant. 1994. *Racial formation in the United States*. Routledge.

Ong, P. y E. Blumenberg. 1993. An unnatural trade-off: Latinos and environmental justice". En R. Morales y F. Bonilla (coords.). *Latinos in a changing U.S. economy* (207-225). Sage.

Parson, D. 1984. Organized labor and the housing question: public housing, suburbanization and urban renewal. *Society and Space*, *1*, 75-86.

Perlin, S., R. Setzer, J. Creason y K. Sexton. 1995. Distribution of industrial air emissions by income and race in the United States: an approach using the toxic release inventory. *Environmental Science Technology*, *29*(1), 69-80.

Phelan, T. y M. Schneider. 1996. Race, ethnicity, and class in American suburbs. *Urban Affairs Review*, *31*, 659-680.

Pollock, P. y M. Vittas. 1995. Who bears the burdens of environmental pollution? Race, ethnicity and environmental equity in Florida. *Social Science Quarterly*, *76*, 294-310.

Pulido, L. 1996. A critical review of the methodology of environmental racism research. *Antipode*, *28*(2), 142-159.

Pulido, L., S. Sidawi y R. Vos. 1996. An archaeology of environmental racism in Los Angeles. *Urban Geography*, *17*(5), 419-439.

Quadagno, J. 1994. *The color of welfare*. Oxford University Press.

Roediger, D. 1991. *The wages of whiteness*. Verso.

Romo, R. 1983. *History of a barrio: East Los Angeles*. University of Texas Press.

Roseman, C. y S. Lee. 1998. Linked and independent African American migration from Los Angeles. *The Professional Geographer*, *50*, 204-214.

Sabagh, G. y M. Bozorgmehr. 1996. Population change: immigration and ethnic transformation. En R. Waldinger y M. Bozorgmehr (coords.). *Ethnic, Los Angeles* (79-107). Sage.

Sadd, J., M. Pastor, J. Boer y L. Snyder. 1999. Every breath you take . . . The demographics of point source air pollution in Southern California. *Economic Development Quarterly*, *13*(2), 107-123.

Sahagun, L. 1989. Toxic neighbors: measure would force metal platers out of residential areas. *Los Angeles Times*, 28 de agosto, Metro 1, 6.

Sanchez, G. 1993. *Becoming Mexican American: ethnicity, culture and identity in Chicano Los Angeles, 1900-1945*. Oxford.

Saxton, A. 1971. *The indispensable enemy*. University of California Press.

Schiesl, M. 1995. Designing the model community: The Irvine Company and suburban development, 1950-88. En R. Kling, S. Olin y M. Poster (coords.). *Postsuburban California* (55-91). University of California Press.

Scott, A. 1990. *Metropolis: from division of labor to urban form*. University of California Press.

Scott, A. 1996a. The manufacturing economy: ethnic and gender divisions of labor. En R. Waldinger y M. Bozorgmehr (coords.). *Ethnic Los Angeles* (215-44). Sage.

Scott, A. 1996b. High technology industrial development in the San Fernando Valley and Ventura County. En A. Scott y E. Soja (coords.). *The city* (276-310). University of California Press.

Scott, M., S. Cutter, C. Menzel y J. Minhe. 1997. Spatial accuracy of the EPA's environmental hazards databases and their use in environmental equity analysis. *Applied Geographic Studies*, *1*(1), 45-61.

Sharpe, W. y L. Wallock. 1994. Bold new city or built up 'burb? Redefining contemporary suburbia. *American Quarterly*, *46*, 1-30.

Smith, N. 1993. Homeless/global: scaling places. En J. Bird, B. Curtis, T. Putnam y G. Robertson (coords.). *Mapping the futures: local cultures, global change* (87-119). Routledge.

Smith, S. 1993. Residential segregation and the politics of racialization. En M. Cross y M. Keith (coords.). *Racism, the city, and the state* (128-143). Routledge.

Soja, E. 1989. *Postmodern geographies.* Verso.

Soja, E. 1996. Los Angeles, 1965-1992: from crisis generated restructuring to restructured-generated crisis. En A. Scott y E. Soja (coords.). *The city* (426-462). University of California Press.

Szasz, A. y M. Meuser. 1997. Environmental inequalities: literature review and proposals for new directions in research and theory. *Current Sociology*, *45*(3), 99-120.

Szasz, A., M. Meuser, H. Aronson y H. Fukarai. 1993. The demographics of proximity to toxic releases: the case of Los Angeles county [ponencia en *Meetings of the American Sociological Association*, Miami].

United Church of Christ, Commission for Racial Justice. 1987. *Toxic wastes and race in the United States.*

U.S. Division of Research and Statistics. 1939. *Federal Home Loan Bank Board. Residential Security Map. Sections 1-4. Record Group 95, Box 101.* National Archives and Records Administration, College Park, MD.

U.S. General Accounting Office. 1995. *Hazardous and nonhazardous waste: demographics of people living near waste facilities.* GAO/RCCD—95—84.

U.S. General Accounting Office. 1984. *Siting of hazardous waste landfills and their correlation with racial and economic status of surrounding communities.*

Walker, R. 1981. A theory of suburbanization: capitalism and the construction of urban space in the United States. En M. Dear y A. Scott (eds.). *Urbanization and urban planning in capitalist society* (383-429). Methuen.

Warren, W. 1986-1987. Maps: A spatial approach to Japanese American communities in Los Angeles. *Amerasia*, *13*, 137-151.

Washington v. Davis. 1976. 426 U.S. 229, 96 S. Ct. 2040.

Weeks, P. 1963. 700 march for integration in Torrance Tract. *Los Angeles Times*, 30 de junio, 1, 12.

Woods, C. 1998. *Arrested development: regional planning in the Mississippi delta*. Verso.

Yandle, T. y D. Burton. 1996. Reexamining environmental justice: a statistical analysis of historical waste landfill siting patterns in metropolitan Texas. *Social Science Quarterly*, *77*, 477-492.

Zimmerman, R. 1993. Social equity and environmental risk. *Risk Analysis*, *13*, 649-666.

Zimmerman, R. 1994. Issues of classification in environmental equity: how we manage is how we measure. *Fordham Urban Law Journal*, *21*(3), 633-669.

Zoning Map Company. 1930. *The Los Angeles Zoning Atlas. California Historical Society, L.A. Area Chamber of Commerce Collection*, Box 66. Special Collections, University of Southern California.

21. Avanzar en una ecología política de los discursos ambientales globales*[1]

Neil W. Adger

Resumen: En la última década, las políticas y las acciones ambientales nacionales e internacionales han estado dominadas por cuestiones definidas en lo general como problemas ambientales globales. En este artículo identificamos los principales discursos asociados a cuatro problemas ambientales globales: la deforestación, la desertificación, el uso de la biodiversidad y el cambio climático. Estos discursos se analizan en función de sus mensajes, estructuras narrativas y prescripciones políticas. Encontramos sorprendentes paralelismos en la naturaleza y estructura de los discursos y en su ilegibilidad a escala local. En cada una de las cuatro áreas existe un discurso de *gestión ambiental global* que representa una visión tecnocéntrica del mundo según la cual los anteproyectos basados en intervenciones políticas externas pueden resolver los dilemas ambientales globales. Cada tema tiene también un discurso *populista* opuesto que presenta a los actores locales como víctimas de intervenciones externas que provocan degradación y explotación. Los discursos de gestión dominan en los cuatro temas, pero también se aportan importantes contribuciones a las decisiones políticas desde los discursos populistas. Existen, además, ideas heterodoxas y pretensiones negacionistas en cada una de estas áreas, en mayor o menor medida, en las que se cuestiona la existencia o la gravedad del problema ambiental. Presentamos datos procedentes de investigaciones sobre lugares concretos que no encajan fácilmente con los discursos dominantes, ni gerencialistas ni populistas. La investigación demuestra que las instituciones responsables de la formulación de políticas se distancian de los usuarios de los

1 Publicado originalmente en: Neil W. Adger, 2001, "Advancing a political ecology of global environmental discourses" (*Development and Change*, 32: 681-715.
*N. de T.: Se advierte al lector que algunas citas dentro del texto, comentarios a pie de página y en las referencias, señalan que se encuentra "en prensa". La traducción se mantuvo fiel al texto original.

recursos y que la gestión ambiental a escala local se mueve con una dinámica distinta y experimenta manifestaciones alternativas de cambio ambiental e imperativos de subsistencia.

Introducción

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, los líderes mundiales y los ecologistas, desde Maurice Strong hasta Fidel Castro, despertaron el optimismo del mundo por un futuro para el planeta basado en principios universales de sostenibilidad y derechos ambientales. Abordar los principales problemas del cambio ambiental global era una de las acciones clave para impulsar el desarrollo sostenible. Pero la retórica de la CNUMAD[2] estaba casi exclusivamente dominada, en nuestra opinión, por la creencia de que los denominados problemas ambientales globales pueden "resolverse" de algún modo mediante una acción coordinada a escala mundial. Casi una década después, los problemas ambientales globales siguen siendo tan intransigentes como siempre, pero el lenguaje de gestión sigue dominando los debates sobre el progreso. En este artículo analizamos algunos de los elementos clave de los debates que se han desarrollado en la política y en la práctica. Argumentamos que el cambio ambiental local es en gran medida ilegible a través de los lentes del discurso de gestión dominante o de las alternativas populistas que identificamos. Los intentos de normalizar las ideas y las formas de construir la realidad se han observado tanto en los ámbitos políticos como en el papel del Estado en la modernización y el desarrollo (Scott, 1998). Nuestra noción de ilegibilidad de la adaptación local resuena con las de Scott (1998) sobre la programación deliberada del proceso de desarrollo para mejorar la "legibilidad".

2 Reconocemos que los debates mundiales sobre el ambiente no empezaron simplemente en 1992. Más bien, la CNUMAD supuso la culminación de los debates de las tres últimas décadas. Estas ideas pueden remontarse a acontecimientos e informes históricos como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, el informe del Club de Roma de 1973, la Estrategia Mundial de Conservación de la UICN de 1980 y su continuación, *Cuidar la Tierra*, publicado por la UICN, el PNUMA y el WWF (1991), el informe Brundtland de 1987 (WCED, 1987) y, por último, la conferencia UNCED de Río de Janeiro de 1992.

Emprendemos este análisis examinando cuatro grandes cuestiones ambientales: la deforestación, la desertificación, la utilización de la biodiversidad y el cambio climático. El análisis se enmarca en el planteamiento general de la ecología política (Blaikie y Brookfield, 1987; Bryant y Bailey, 1997; Peet y Watts, 1996; Stott y Sullivan, 2000) al vincular los discursos subyacentes del cambio ambiental con las políticas e instituciones dedicadas al ambiente y el desarrollo. Al revisar las fronteras de la ecología política, Peet y Watts (1996) sostienen que los enfoques discursivos del análisis del ambiente y el desarrollo son fundamentales para esta disciplina emergente. Esta área de la ecología política incluye investigaciones sobre la sociología de la ciencia y el conocimiento, sobre la historia de las instituciones y la política en materia de ambiente y desarrollo, y, lo que es más importante, sobre la globalización de los discursos ambientales en relación con los "nuevos lenguajes y relaciones institucionales de la gobernanza y la gestión medioambiental global" (1996: 11). Del mismo modo, para Stott y Sullivan (2000: 2), la ecología política es "una preocupación por rastrear la genealogía de las narrativas relativas al "medio ambiente", por identificar las relaciones de poder apoyadas por dichas narrativas y por afirmar las consecuencias de la hegemonía sobre estas narrativas y dentro de ellas para el desarrollo económico y social y, en particular, para limitar las posibilidades de autodeterminación".

Una cuestión clave dentro de la ecología política es la exploración de las conexiones multinivel entre los fenómenos globales y locales, no solo en las funciones ambientales, sino también en la toma de decisiones y las jerarquías de poder. En las secciones que siguen se articulan los discursos globales e internacionales en torno al cambio ambiental global y las acciones e interacciones multinivel que los vinculan con los ejemplos de cambios ambientales experimentados en las localidades. Argumentamos que, dado que los discursos globales se basan a menudo en mitos y esquemas del mundo compartidos, las prescripciones políticas que se derivan de ellos suelen ser inadecuadas para las realidades locales. Las conexiones a múltiples niveles se producen por medio de las acciones y prácticas de los agentes gubernamentales, los individuos y la sociedad civil, y las alianzas que se forman entre ellos. En este artículo definimos los discursos como regímenes de

conocimiento y exploramos las repercusiones de las políticas que se derivan de ellos. Al adoptar este enfoque, reconocemos que está surgiendo un debate sobre la compleja evolución e interacciones entre el conocimiento y la política (Keeley y Scoones, 2000; Robbins, 2000).

Las cuatro cuestiones que examinamos —deforestación, desertificación, utilización de la biodiversidad y cambio climático— son fundamentales en los debates actuales sobre ambiente y desarrollo a todas las escalas. Es importante señalar que los cuatro temas se relacionan entre sí en términos de los procesos biofísicos subyacentes, en cuanto a los entornos en los que se observan estos cambios y en cuanto a las instituciones que tienen intereses o que tratan de gestionar y apropiarse de los recursos asociados a ellos. En la siguiente sección se esboza el análisis de los discursos como marco metodológico de nuestro análisis. A continuación, presentamos los principales discursos identificados en cada uno de los cuatro ámbitos. Estas descripciones esbozan las narrativas, la estructura narrativa y las intervenciones y políticas asociadas a los discursos relativos a los cuatro temas. A continuación, examinamos las similitudes y diferencias entre los discursos, los vínculos entre ellos y las implicaciones de los principales discursos para la política del ambiente y el desarrollo.

Análisis del discurso sobre medio ambiente y desarrollo

A grandes rasgos, definimos el discurso como el significado compartido de un fenómeno. Este fenómeno puede ser pequeño o grande, y su comprensión puede ser compartida por un grupo pequeño o grande de personas en el plano local, nacional, internacional o mundial. Los actores adheridos al discurso participan en diversos grados en su producción, reproducción y transformación mediante declaraciones escritas y orales.[3] En este artículo,

3 El análisis del discurso es un ejemplo de los enfoques construccionistas del estudio del mundo social, que no se centran directamente en un fenómeno concreto en sí, sino en las afirmaciones relativas a ese fenómeno, en quienes las hacen y en el proceso de elaboración de estas (Best, 1989; Hannigan, 1995). El examen histórico de Michel Foucault de fenómenos sociales como la sexualidad, el encarcelamiento y el castigo, y el Gobierno (Foucault, 1979; 1984; 1991), representan clásicos del análisis del discurso. También pueden rastrearse sus raíces en los primeros análisis de la ideología y la retórica, así como en contribuciones posteriores de la sociología de la ciencia, la filosofía del lenguaje y la tradición interpretativa pospositivista (Hajer, 1995: 43).

nos centramos en los principales discursos mundiales relativos a cuatro cuestiones ambientales globales. En el ámbito ambiental, los análisis del discurso y otros enfoques afines se han utilizado para caracterizar las sabidurías dominantes y recibidas (Leach y Mearns, 1996), la evolución de las crisis ambientales y su construcción social (Roe, 1991; 1995; 1999).

Otros ejemplos en este sentido se encuentran en ámbitos como la ciencia en torno al agotamiento de la capa de ozono (Litfin, 1994) y la lluvia ácida (Hajer, 1995). En un contexto más general, Dryzek (1997) establece una distinción entre los principales discursos que contrarrestan el discurso hegemónico "moderno" previo al industrialismo. En relación con estos, O'Riordan (1983) extrae los fundamentos filosóficos del ecocentrismo y las visiones tecnocéntricas del mundo físico para explicar la ciencia, la política pública y la acción en el uso de los recursos y la protección del ambiente.[4]

En la década de los noventa, los discursos sobre el cambio ambiental global pasaron a ocupar parte central en los debates ambientales y dieron lugar a soluciones a escala mundial para lo que se perciben como importantes problemas ambientales. Se ha argumentado que esto se debe, en cierta medida, a los avances científicos en la detección de fenómenos de cambio ambiental global, como el cambio climático, y al auge de los esfuerzos científicos a escala mundial (Shackley y Wynne, 1995). Otros motivos pueden estar simplemente asociados a la globalización económica y cultural. Taylor y Buttel (1992) y Goldman (1998) cuestionan esta hegemonía del cambio ambiental global. Goldman sostiene que la ciencia que contribuye a este debate es solo otra faceta de un nuevo paradigma dominante en el que la gestión de los bienes comunes es la panacea y el antídoto contra todas las amenazas. Además, sostiene que el paradigma emergente de los bienes comunes mundiales está impulsado por intereses que pretenden colonizar y extraer de los bienes comunes mundiales lo que antes solo se controlaba en la localidad.

4 Otro conjunto de análisis procede de las críticas a los procesos de desarrollo social y económico. Los análisis de los discursos en las políticas de desarrollo han sido emprendidos, por ejemplo, por Ferguson (1990) y Grillo y Stirratt (1997), y sobre la interacción del conocimiento con la política en el nexo entre ambiente y desarrollo (Leach y Mearns, 1996; Peet y Watts, 1996).

El análisis del discurso "ha llegado a significar muchas cosas diferentes en tantos lugares distintos" (Hajer, 1995: 43). En este artículo consideramos que los tres elementos siguientes representan los principales aspectos del análisis del discurso: el análisis de las regularidades en las expresiones para identificar los discursos; el análisis de los actores que producen, reproducen y transforman los discursos; y las repercusiones sociales y los resultados políticos de los discursos. Las formaciones discursivas en los temas ambientales tratados en este artículo se centran en cierta medida en los pobres de las zonas rurales de los países en desarrollo. El análisis delibera sobre las implicaciones sociales de los discursos para este amplio grupo. Al describir los discursos, presentamos datos relativos a los tres elementos descritos antes, pero nos centramos en particular en identificar las principales características de los discursos, sus repercusiones y resultados sociales. Con el fin de centrarnos en nuestro análisis comparativo de las características de los discursos dentro de los cuatro temas, el alcance de este artículo se limita a cómo evolucionan e interactúan los diversos discursos en múltiples escalas, en lugar de analizar directamente la compleja relación entre el discurso y la formulación de políticas.

Un discurso contiene un corpus de expresiones en las que podemos encontrar homogeneidad tanto en el mensaje como en los medios expresivos.[5] *La homogeneidad en el mensaje* implica que las expresiones comparten un determinado conocimiento y percepción del fenómeno en cuestión, y también puede haber creencias compartidas sobre las causas de los problemas y las respuestas adecuadas. La homogeneidad en el mensaje constituye las características de un discurso como sistema de verdad. Nuestro análisis, en las secciones siguientes, aborda cómo se expresan las percepciones y preocupaciones por el ambiente y cómo se perciben las intervenciones externas. El término *medios expresivos* se refiere a las formas en que se comunica el mensaje de un discurso. Dentro del análisis del discurso, los medios expresivos se han analizado en términos de narrativas (Petersen, 1997), líneas argumentales (Hajer, 1995) y metáforas y otros recursos

5 El marco analítico para el análisis del discurso aplicado aquí se describe con mayor profundidad en Svarstad (en prensa).

retóricos (Dryzek, 1997). Aquí centraremos la presentación y el análisis en las *narrativas*, de las que son importantes dos aspectos.

En primer lugar, una narrativa es una historia con un orden cronológico (principio, nudo y desenlace). Roe, por ejemplo, define el concepto de "narrativa del desarrollo" en el que se hace hincapié en la cronología (Roe, 1991; 1995). Roe llama la atención sobre las implicaciones políticas de las narrativas del desarrollo, como la apelación a la "tragedia de los comunes" a la privatización y los controles ganaderos. Destaca que una narrativa del desarrollo no se ve necesariamente desplazada por hallazgos negativos que parecen refutarla. Por tanto, Roe propone crear "contranarrativas" que cuentan una historia mejor. Además, propone que, cuando proceda, los investigadores "desnarrativicen" insistiendo en que "no hay historia que contar hasta que se conozcan los hechos" (Roe, 1991; 1995; 1999).

En segundo lugar, una narración constituye una estructura particular con respecto a un "elenco" de actores implicados. Este aspecto se deriva de la narratología y la semiótica social, en las que los patrones de reparto y otras características de las expresiones se han utilizado para analizar fenómenos sociales tan diversos como los cuentos de hadas y la MTV (Berger, 1997; Petersen, 1997). Nuestro análisis se limita a explorar si las narraciones de los discursos seleccionados reflejan patrones relativos a la participación de los arquetipos *héroes*, *villanos* y *víctimas*.[6]

Un discurso puede calificarse de hegemónico si domina el pensamiento y se traduce en disposiciones institucionales. Una forma más débil de hegemonía podría etiquetarse como dominación discursiva (Hajer, 1995: 60-61). Como sostienen Thompson y Rayner (1998), la pluralidad en los discursos puede ser difícil de discernir en determinados momentos porque todas las voces se ven obligadas a utilizar el vocabulario del discurso dominante. En el presente análisis, intentamos definir los discursos dominantes y los discursos cuestionadores o alternativos en cada una de las cuatro áreas. Este marco metodológico se aplica en las siguientes secciones. Los voluminosos debates políticos y populares sobre el cambio

6 Estos arquetipos también pueden reflejarse en enunciados de los discursos que no se expresan en narrativas completas.

ambiental global necesitan hacer un recuento parcial y selectivo de los principales discursos, sus narrativas y resultados sociales. En primer lugar, esbozamos cada uno de los ámbitos políticos e identificamos los discursos dominantes y alternativos dentro de ellos, antes de buscar paralelismos y lecciones más amplias.

Deforestación

La cuestión de la deforestación se convirtió en un referente del activismo ecologista y del desarrollo del pensamiento sobre el cambio ambiental global a medida que surgía como problema ambiental mundial durante la década de los ochenta. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, por ejemplo, Myers puso de relieve las repercusiones de la deforestación rápida y a gran escala de los bosques tropicales (Myers, 1979), sobre todo en la pérdida de especies (Myers, 1984). Durante la década siguiente, las elevadas tasas de conversión forestal observadas se relacionaron con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y otros aspectos de la degradación ambiental como la erosión del suelo, las inundaciones y la disponibilidad de agua. Los discursos sobre la deforestación tienen fuertes vínculos con los de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desertificación no solo en cuanto a los paralelismos en su auge y retórica, sino también en la vinculación de los resultados de los procesos físicos y ambientales. Desde entonces, la deforestación se ha presentado como un "problema" mundial; en el Norte, la atención se ha centrado a menudo en la destrucción de las selvas tropicales, identificándose la Amazonia, la cuenca del Congo y el Sudeste Asiático como tres zonas clave donde el cambio es especialmente generalizado y rápido. En la década de los noventa se ha ampliado el foco de atención y los bosques templados del norte se incluyen en las clasificaciones de "Bosques fronterizos" (Bryant *et al*., 1997).

La atribución de las causas de la pérdida de bosques es una característica clave de los discursos sobre la deforestación. La creciente bibliografía sobre el cambio de la cubierta forestal identifica una serie de agentes y causas de la deforestación (Angelsen y Haimowitz, 1999; Brown y Pearce, 1994) entre las que se incluyen el aumento de la población, la migración, la tenencia de la tierra, el comercio de productos forestales, el desarrollo de

infraestructuras y las políticas gubernamentales, incluidas las subvenciones. Se argumenta que estos agentes y causas se diferencian regionalmente (Bawa y Dayanandan, 1997) y a menudo actúan de forma combinada (Allen y Barnes, 1985). Diversos modelos conceptuales han intentado dilucidar los vínculos causales (por ejemplo, Bilsborrow y Geores, 1994; Bromley, 1998; Palo, 1994). En África, la agricultura de subsistencia a pequeña escala suele identificarse como la causa más importante de la deforestación (Kaoneka, 1998), aunque se considera que está alimentada por el rápido crecimiento de la población y la pobreza. Entre los factores causales se han señalado las actividades de las empresas madereras y de los pequeños propietarios y agricultores migrantes.

Se pueden distinguir dos discursos distintos sobre la deforestación. El primero —y dominante— considera a los agricultores de tala y quema como la principal causa de la destrucción de vastas extensiones de bosque. Myers (1994), por ejemplo, habla de "cultivadores desplazados". Esta perspectiva vincula la pobreza, la degradación del ambiente, los fallos del gobierno y del mercado y la seguridad ambiental a los cambios en la cubierta forestal. Considera la deforestación como un problema ambiental mundial y utiliza una serie de narrativas de crisis para impulsar la acción mundial (léase del Norte) con el fin de frenar la deforestación y la catástrofe ambiental asociada a ella. Se trata de un discurso *neomalthusiano* y *de gestión*, ya que describe una espiral de superpoblación y consumo que conduce de manera inevitable a la pérdida de la cubierta forestal y, por tanto, a una crisis ambiental mundial.

Un segundo discurso *populista* acepta la deforestación como un grave problema ambiental, pero ve las causas de forma diferente. Presenta a los pequeños agricultores y a los gestores de la tierra no como agentes activos del cambio, sino más bien como víctimas, impulsadas, sin elección propia, a prácticas destructivas (Colchester y Lohmann, 1993; Marglin y Marglin, 1990). Los verdaderos culpables son las empresas madereras y los intereses transnacionales que financian y alimentan sus operaciones. El consumo en el Norte impulsa el comercio de maderas tropicales y la explotación de los bosques tropicales. Los actores locales y, en particular, los habitantes indígenas de los bosques se ven obligados a abandonar sus prácticas "tradicionales" de uso de la tierra,

respetuosas con el ambiente, y se ven desplazados por las empresas madereras, los ganaderos y los operadores de plantaciones de cultivos comerciales, que dejan de lado a estos usuarios de los bosques desempoderados mientras transforman los ricos bosques "prístinos" para alimentar su codicia. La narrativa asociada a este discurso presenta este proceso como despiadado y violento, y a menudo implica la masacre y la "limpieza étnica" de los pueblos indígenas. Así, el discurso populista presenta a los indígenas como héroes, y a las empresas madereras y los ganaderos como villanos (Brown y Rosendo, 2000; Conklin y Graham, 1995).

Ambos discursos sobre la deforestación llevan asociados poderosos relatos y metáforas. Las imágenes de restos humeantes de bosque se yuxtaponen a tomas aéreas de densas copas envueltas en nubes y pueblos indígenas pintados de colores en armonía con la naturaleza. Ambos encarnan mitos particulares de la naturaleza, con nociones de bosque clímax, estabilidad y fragilidad de los ecosistemas forestales que justifican la necesidad de una acción concertada y las narrativas de crisis de apoyo sobre el cambio irreversible y la destrucción de todo el sistema. Los bosques tropicales se presentan como los "pulmones del mundo" por su contribución al ciclo global del carbono.

El examen de los resultados de las políticas y prácticas basadas en los distintos discursos (la aplicación de la práctica ligada a los regímenes de conocimiento) pone de manifiesto sus deficiencias. Un estudio de caso sobre los procesos de conversión forestal en Camerún, por ejemplo, recogido en Brown y Ekoko (2001) y Brown y Lapuyade (2001), examina los actores y las interacciones en tres pueblos de zonas forestales húmedas. Este estudio dilucida las experiencias e interacciones a microescala relativas a los actores locales y la deforestación. La investigación va en contra de la imagen simplificada del cambio que presentan tanto el discurso neomalthusiano como el populista. Las estimaciones actuales sitúan las tasas de deforestación en Camerún en aproximadamente 1 300 km^2 al año (o 0.6% de la superficie forestal total al año) entre 1990 y 1995, y citan como causas principales el crecimiento demográfico y los cultivos itinerantes (Banco Mundial, 1999). Pero estas estimaciones ocultan una compleja economía política de ganadores y perdedores. Las interacciones y la presencia de las empresas madereras en las zonas forestales de Camerún tienen diversas repercusiones. La presencia de un mayor número de migrantes, por ejemplo,

proporciona mercados para los productos locales registrados en cada una de las aldeas, al menos de forma temporal. El trabajo de campo realizado en el centro de Camerún demuestra que, aunque los aldeanos de esta zona recordaban con cariño los primeros tiempos de la explotación forestal como años de bonanza, la situación actual, tras dos décadas de actividad maderera, implica menos beneficios para la población local y un resentimiento creciente (Brown y Ekoko, 2001). Un sinfín de contactos informales entre distintos agentes determina la arquitectura general de las relaciones sociales y económicas asociadas al uso de los recursos forestales. Por ejemplo, una empresa maderera internacional estuvo activa en el centro de Camerún entre 1975 y 1985 y se consideró casi de manera unánime que había aportado algunos beneficios en términos de desarrollo social. La percepción de los propietarios era que la mayoría de los empleados de la empresa eran del pueblo y que la economía local estaba "en auge" (Brown y Lapuyade, 2001).

La tala repercute claramente en el uso de la tierra y las prácticas de gestión de recursos de los agentes locales. Las carreteras proporcionan acceso y un medio para "acercar el mercado", mejoran el acceso a los bosques para la agricultura y aumentan la migración. Estos factores están, por supuesto, relacionados de forma inextricable entre sí. Sin embargo, estos impactos se diferencian socialmente entre los aldeanos en función del género y la edad (Brown y Lapuyade, 2001). También parece que la presencia de empresas madereras en la zona de bosque húmedo de Camerún ha contribuido a cambios más generales en la forma en que la población local percibe el bosque y se relaciona con él. Los residentes reconocen ahora valores financieros y económicos en el bosque y se dan cuenta de que hay muchas mercancías asociadas a él. La interacción con las empresas madereras puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una mayor conciencia conservacionista, mientras que en otras zonas solo lleva a la gente a explotar más rápidamente los valiosos recursos. Estas observaciones demuestran que la descripción de los agentes externos y los habitantes locales de los bosques como víctimas o villanos en los relatos neomalthusianos y populistas de la deforestación ignoran la complejidad y la simbiosis de las interacciones sociales en las zonas forestales fronterizas.

La investigación en la llamada "frontera forestal envejecida" de la Amazonia (Brown y Muchagata, 1999) también muestra cómo los usuarios de los bosques

no se ajustan a ninguno de los dos estereotipos presentados por los discursos. Los pequeños agricultores de la región de Maraba, en la Amazonia oriental, valoran los recursos forestales, pero los mercados externos de productos ganaderos hacen que la conversión del bosque en pastizales resulte económicamente atractiva a corto plazo. La seguridad de los medios de subsistencia en las regiones aisladas de la frontera forestal requiere un mayor énfasis en la generación de ingresos a corto plazo que en la conservación de los bosques a largo plazo, dadas las condiciones políticas y económicas actuales. Sin embargo, los colonos de esta región han hecho una campaña exitosa a favor de la creación de una reserva agroextractivista para gestionar colectivamente y utilizar de forma sostenible zonas de bosque y defender el bosque de la conversión por parte de otros usuarios de la tierra más poderosos, como los ganaderos. Al mismo tiempo, los pequeños ganaderos colonos dependen de los grandes ganaderos como mercado para los terneros, por lo que existen algunos aspectos de coexistencia entre los distintos actores.

De ahí que la dinámica en el ámbito micro del uso de los bosques, incluso cuando contribuye a una aparente "deforestación" en los dos ejemplos de África Central y la Amazonia, demuestre la irrelevancia de los discursos globales (tanto neomalthusianos como populistas) para explicar las relaciones dinámicas de poder local y los resultados ambientales. La migración, la seguridad económica y el acceso y los derechos a los recursos son las cuestiones clave. Así, la sabiduría convencional promovida por los dos discursos convencionales sobre la deforestación tiene rasgos en común. Rara vez desglosan el complejo abanico de actores, sino que más bien los retratan como una industria forestal insostenible (de productores a consumidores) y habitantes de los bosques. Por lo general, no reconocen la dinámica de las relaciones y el cambio y asumen vínculos simplistas entre causa y efecto para el cambio forestal extremo.

Desertificación

La idea de que la sobreexplotación local provoca la invasión del desierto y la degradación de las tierras áridas en general se "estableció" sobre todo durante la colonización europea de África. Durante las ocupaciones francesas en África Occidental, los silvicultores y administradores colo-

niales percibieron claros signos de mala gestión ambiental indígena y el consiguiente avance del desierto. En 1907, una misión forestal encabezada por J. Vuillet, jefe del Servicio de l'Agriculture en la colonia Haut-Sénégal, en Niger, declaró: "Es cierto. El Sahara avanza hacia el sur, y ello debido a la acción del hombre".[7] Más tarde, esta idea fue respaldada regularmente por informes administrativos coloniales, informes de investigación (Aubreville, 1949; Stebbing, 1938) y relatos de viajes (Bovill, 1921). Aunque la idea recibió menos atención durante la década de lluvias excepcionalmente elevadas de los cincuenta, las sequías de los setenta y ochenta hicieron resurgir el término y la creencia en la "desertificación".

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), creado tras la Conferencia de Estocolmo sobre el Entorno Humano de 1972, consideraba que la "desertificación" era una de las principales razones de su existencia.[8] La organización convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación en Nairobi en 1978 y encargó varios estudios para documentar el alcance de la desertificación (Lamprey, 1975; Mabbutt, 1984). Además, en la CNUMAD de 1992, la desertificación surgió, junto con la biodiversidad y el cambio climático, como una nueva cuestión merecedora de una convención internacional sobre ambiente.[9] El capítulo 12 de la Agenda 21 se centra en la desertificación y afirma que una cuarta parte de la superficie terrestre total del mundo está afectada por este proceso. La Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que entró en vigencia en diciembre de 1996, afirma que 250 millones de personas se ven directamente

7 Centre des Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence, Affaires économiques, R24 (14 MI 1566), Mission forestière` re, 1907.

8 "La desertificación es probablemente la mayor amenaza medioambiental para el futuro bienestar de la Tierra": Peter Shaw Thacher, director ejecutivo adjunto del PNUMA (Shaw, 1979).

9 La desertificación se incluyó en la agenda mundial de la CNUMAD gracias a la persistencia africana y a que Estados Unidos apoyó inesperadamente la postura africana (Porter y Brown, 1996). Se cree que este apoyo se produjo en respuesta a las críticas ambientales que Estados Unidos había recibido por no apoyar la Convención sobre Biodiversidad y por dar largas a los preparativos de la Convención sobre Cambio Climático (Carr y Mpande, 1996). La concesión del apoyo de EE. UU. a una convención sobre desertificación también puede interpretarse como parte de un intercambio entre el Norte y el Sur: la UE y EE. UU. esperaban que los Estados africanos apoyaran las cuestiones pendientes de la Declaración de Río. Así pues, reconocemos que la retórica sobre la crisis de la desertificación está directamente vinculada a los resultados políticos y de gestión.

afectadas por la desertificación y que mil millones están en peligro.[10] Se pueden identificar dos discursos con narrativas asociadas que apoyan la idea de la desertificación. En primer lugar, el discurso neomalthusiano describe la superpoblación de las tierras secas como el principal problema. Una versión abreviada de la narrativa estándar dice, por ejemplo: "[El cinturón sudano-saheliano] presenta una de las tasas de crecimiento demográfico anual más rápidas del continente, a pesar de que en muchas zonas la población, principalmente rural [...] ya supera la capacidad de carga con los niveles tecnológicos actuales. Este crecimiento ha provocado una espiral descendente de degradación extensiva de la tierra y escasez de leña" (Banco Mundial, 1996: 24).

Un segundo discurso, *populista*, explica la degradación de la tierra por la marginación de pequeños propietarios y pastores causada por la explotación colonial y neocolonial posterior. Su narrativa puede considerarse directamente contraria al discurso neomalthusiano, al centrarse en los factores políticos en lugar del crecimiento demográfico, pero sin cuestionar la idea misma de desertificación:

> En África Occidental, las administraciones coloniales impusieron a los agricultores locales monocultivos anuales para la exportación, sobre todo cacahuates para aceite de cocina y piensos para el ganado y algodón para las fábricas textiles francesas y británicas. Pero el cultivo de las mismas cosechas año tras año en la misma tierra, sin ninguna mezcla o rotación de cultivos, árboles y ganado, arruinó rápidamente los suelos. Solo dos años consecutivos de cacahuates robaron al suelo de Senegal casi un tercio de su materia orgánica. El rápido agotamiento de los suelos empujó a los agricultores a imponer los cultivos de exportación en tierras aún más vulnerables […] Además, la expansión de los cultivos de exportación, al hacinar a los ganaderos en zonas aún más pequeñas, ha contribuido al sobrepastoreo (Lappé *et al*., 1998: 42-43).

Ambos discursos se apoyan en una serie de relatos sobre la gravedad, el alcance y las causas de la desertificación y la degradación de la tierra. La historia más famosa y repetida en relación con la desertificación se refiere

10 Véase la Convención de Lucha contra la Desertificación en http://www.unccd.ch/

a las observaciones de un ecologista, Hugh Lamprey, en un vuelo de reconocimiento sobre una zona de Sudán en 1975. La historia se ha utilizado mucho para presentar el alcance de la desertificación. La ONU encargó a Lamprey una estimación del avance del desierto. Utilizando una avioneta, comparó lo que había observado en 1975, justo después de una grave sequía, con un mapa de vegetación de 1958, al final de una década excepcionalmente húmeda en el Sahel. La conclusión a la que se llegó fue que el Sahara se había desplazado 90-100 km hacia el sur entre 1958 y 1975. Esto implicaba un avance medio del desierto de 5-6 km al año (Lamprey, 1975). Más tarde, estos datos han sido ampliamente citados por los Gobiernos, los donantes de ayuda internacional y los medios de comunicación, y se han incorporado a los libros de textos escolares como ejemplo de hechos irrefutables que apuntan a una crisis ambiental mundial. Se trata de un ejemplo apropiado de cómo una única narración ha contribuido de forma significativa a la institucionalización de un discurso de crisis.

La escala temporal elegida en un entorno altamente fluctuante e inestable es un problema obvio del estudio de Lamprey, cuando los resultados se extrapolan a periodos más largos y a zonas más extensas. Resulta aún más problemático cuando los cambios observados se explican por la acción humana: "El problema de la invasión de la arena no puede atribuirse únicamente a errores recientes, sino que es el resultado de varios miles de años de abuso de los frágiles ecosistemas que existían antiguamente en las zonas del Sahara y Nubia" (Lamprey, 1975: 4). Tanto el discurso neomalthusiano como el populista sobre la desertificación han demostrado su poder y han servido para informar al Estado y al sector de la ayuda. Sin embargo, en la actualidad están siendo cuestionados a medida que se acumulan pruebas en contra de sus principales postulados. Durante la última década, nuevas investigaciones han socavado la idea de la desertificación inducida por el hombre (Behnke y Scoones, 1993; Helldén, 1991; Mortimore, 1989; 1998; Oba *et al*., 2000; Swift, 1996; Warren y Hhogali, 1992). Esta investigación reconoce la resiliencia y variabilidad de las tierras secas y subraya la necesidad de la flexibilidad para hacer frente a un entorno inestable en alto grado. Por tanto, la observación empírica ilustra el contraste entre los discursos generales sobre la desertificación y

los procesos identificados "sobre el terreno", así como las implicaciones políticas y las repercusiones locales de los discursos generales.

En Malí, Benjaminsen (1993; 1996; 1997a) ha puesto a prueba los supuestos neomalthusianos sobre el uso de la leña en dos regiones. Ambas regiones se mencionan con frecuencia como casos extremos que tienen necesidades crecientes de leña que provocan la deforestación. Pero la investigación de campo en la región de Gourma, en el norte de Mali, no detectó ninguna relación entre el uso y la deforestación (Benjaminsen, 1993; 1996). Toda la leña utilizada en los hogares locales era madera seca recogida de árboles muertos. Las generosas cantidades de madera muerta disponibles son consecuencia de la fluctuación de las precipitaciones en el Sahel y de las frecuentes sequías. La otra región estudiada, la zona algodonera del sur de Mali, es una de las más densamente pobladas y de cultivo más intensivo del país. En las presentaciones de los donantes de ayuda, las autoridades forestales y los consultores externos se suele insistir en el uso doméstico rural de la leña como una de las principales causas de la deforestación en la región. Dado que la madera muerta disponible no basta para cubrir las necesidades, también se corta madera verde para leña en la zona algodonera. Sin embargo, al comparar los datos de cincuenta pueblos, se comprobó que el consumo estimado de madera verde era en general muy inferior a la regeneración forestal. Solo en una subzona, cerca de una carretera principal, provocando una presión externa sobre el bosque por la explotación comercial de la madera para su venta en los centros urbanos, se generó agotamiento de la leña (Benjaminsen, 1997a).

Estas pruebas de la resistencia de los sistemas sociales y naturales contradicen el discurso neomalthusiano. Pero la evolución de la zona algodonera maliense también representa un caso empírico que cuestiona algunas de las relaciones simplistas planteadas en el discurso populista (Benjaminsen, 2001a; 2001b). Tras varias décadas de intentos coloniales de intensificar la producción de algodón, incluida la coerción durante 1912-46, la producción despegó al final, terminando la década de los cincuenta debido al aumento de los precios. En 1958, la producción de algodón de exportación de Mali era de 3 900 toneladas y cuarenta años más tarde había aumentado hasta alrededor de 0.5 millones de toneladas. Este desarrollo

también ha beneficiado a los cultivos alimentarios de la zona algodonera. De hecho, se ha producido un crecimiento significativo de la producción de cereales en toda la zona, como efecto residual de la intensificación del cultivo del algodón, lo que ha llevado a un aumento de la autosuficiencia durante las últimas décadas (Dioné, 1989; Raymond y Fok, 1995). De este modo, la zona algodonera se ha convertido en exportadora neta de cereales a otras partes del país, así como a los países vecinos.

A pesar de que la expansión del algodón ha convertido a Mali en el mayor productor de algodón del África subsahariana, el sistema no implica un monocultivo sin mezcla ni rotación de cultivos, árboles y ganado, ya que el algodón se cultiva en rotación con el maíz o con el mijo o el sorgo. Los árboles agrícolas, como *la Acacia albida* (conocida por los agricultores por aumentar la fertilidad del suelo), *la Parkia biglobosa* (que produce frutos utilizados para hacer una salsa) y *el Butyrosperum parkii* (que produce nueces utilizadas para hacer manteca de karité) se protegen de manera activa. El resultado es un paisaje típico de parques en amplias zonas verdes en gran parte del área sudano-saheliana de África Occidental. En la última década, los pequeños propietarios también han empezado a plantar árboles para delimitar sus campos. El ganado utilizado como animales de tiro está muy integrado en el sistema agrícola y el estiércol de los establos se recoge y esparce por los campos. Además, el estiércol orgánico procedente de los residuos agrícolas, y los fertilizantes químicos se aplican de forma extensiva y en cantidades cada vez mayores (Benjaminsen, 2001a; 2001b). Por tanto, el cultivo de algodón comercial no tiene un claro efecto minador del suelo, a diferencia de lo que afirma el discurso populista.

En una revisión del discurso neomalthusiano sobre la desertificación, Swift (1996) atribuye la solidez y la amplia aceptación del discurso al hecho de que lo crearon tres grupos principales de actores de acuerdo con sus intereses: los Gobiernos coloniales y nacionales; los donantes de ayuda internacional, en especial las agencias de la ONU, y algunos científicos. Estos actores son los ganadores, mientras que los perdedores del discurso han sido los agricultores y pastores saheliano. En el Plan Nacional Maliense de Lucha contra la Desertificación y el Avance del Desierto (1985-2000), la desertificación se considera incluso la principal causa del propio subdesarrollo:

"La desertificación es el catalizador de nuestro subdesarrollo. El fenómeno es tan importante que cuestiona los cimientos mismos de nuestra existencia" (République du Mali, 1985: 1). Dado que se consideraba que la causa principal era la sobreexplotación humana, era importante tomar medidas para controlar dicha sobreexplotación. Los agricultores y pastores han sido los perdedores de la política ambiental resultante.

En Mali, se imponen severas restricciones y multas al uso local de los recursos (Benjaminsen, 2000). La legislación forestal colonial francesa se centraba principalmente en la conservación. En general, las autoridades coloniales suponían que las poblaciones sahelianas provocaban la degradación de la tierra debido al uso excesivo de los recursos. Por ello, se creó un sistema de permisos de uso y multas por infracción de las normas. El Servicio Forestal, creado en virtud del Decreto Forestal de 1935 para aplicar la política forestal, reclutó a sus agentes entre el ejército y la policía. Su papel como policía forestal, más que como servicio de extensión, continuó durante el periodo colonial y persistió tras la independencia. En 1986, en un periodo en el que "el medio ambiente mundial" se estaba convirtiendo en un tema internacional de primer orden, la legislación forestal maliense se hizo aún más estricta, con multas extremadamente elevadas en comparación con el nivel de ingresos de Mali. El expresidente Moussa Traoré (en el poder desde 1968 a 1991) se convirtió en un "ecologista" preocupado durante la década de los ochenta. Las elevadas multas impuestas por la tala de ramas y los incendios forestales pueden considerarse un intento de complacer a la comunidad internacional y de solicitar ayuda extranjera y financiación para proyectos (Ribot, 1995).

La ley forestal de 1986 prohibía por completo todos los incendios de matorrales. Los pueblos debían pagar multas de 6 000 FrF si los agentes forestales descubrían que se había producido un incendio en las tierras del pueblo. Sin embargo, los agricultores y pastores del sur y el centro de Mali dependen de los incendios provocados al final de la temporada de lluvias para la gestión de los pastos. La nueva ley forestal también hizo obligatorias las estufas ahorradoras de leña. A partir de marzo de 1987, los hogares que no disponían de este tipo de estufas debían pagar una multa de cien francos. Esta política se basaba en el supuesto de que existe una

deforestación generalizada causada por el consumo doméstico de leña. Según esta política, también era ilegal talar árboles o recoger leña seca para venderla sin permiso del Servicio Forestal. Incluso se exigía a los agricultores que obtuvieran permisos para cortar o utilizar los árboles que ellos mismos habían plantado en sus tierras. Sin embargo, se permitía formalmente recoger madera muerta para consumo propio, pero incluso esto podría estar sujeto a una multa arbitraria exigida por los poderosos agentes forestales. El amplio mandato asignado al Servicio Forestal se justificaba por la necesidad de luchar contra la desertificación. Así pues, la aplicación de la política en el ámbito nacional es un resultado directo del discurso neomalthusiano dominante, respaldado por instituciones y procesos internacionales que promueven la gestión del problema mundial de la desertificación.

Uso de la biodiversidad

La pérdida de biodiversidad[11] Se ha destacado como una de las principales consecuencias de la deforestación, pero ha cobrado vida propia en los años ochenta y noventa, impulsada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Una respuesta evidente frente a la preocupación por la pérdida de biodiversidad es que su utilización sostenible puede generar beneficios nacionales y locales sin representar una amenaza para su existencia continuada. Aunque a lo largo de la historia los seres humanos han explorado y explotado los ecosistemas naturales en busca de productos naturales útiles, nosotros utilizamos el término *bioprospección* tal como se ha definido solo a partir de la década de los noventa: la exploración de recursos biológicos para uso comercial. Críticamente, se ha afirmado que la bioprospección constituye una actividad sustentable. Esta sección identifica y explora la retórica dentro de lo que definimos el discurso de la *bioprospección* y las opiniones contrarias dentro del discurso de la *biopiratería*.

11 La diversidad biológica —biodiversidad— se define en términos de diversidad tanto dentro de cada especie como entre especies, material genético vivo y ecosistemas (Wilson, 1992).

La bioprospección y sus vínculos con la conservación fueron propugnados por primera vez por científicos interesados a finales de los años ochenta y noventa (Eisner, 1989; 1991). Eisner (1989) denominó a esta actividad prospección química y propuso que se intensificara de manera sustancial debido a la preocupación por la extinción de especies y la pérdida concomitante de material genético de gran valor para la sociedad humana en forma de nuevos productos en biomedicina. Abogó por la creación de laboratorios de prospección en el Sur que pudieran apoyar los programas de conservación (Eisner, 1991).

La retórica plasmada en el fomento de actividades para potenciar la utilización sostenible se adoptó de forma generalizada en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Entre sus objetivos figuran la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (Naciones Unidas, 1992, artículo 1). Varios comentaristas consideran que la bioprospección es una actividad que puede contribuir a la consecución de los tres objetivos, en especial en los países pobres, pero ricos en biodiversidad, del Sur. Al mismo tiempo, se argumenta que la bioprospección tiene el potencial de proporcionar al mundo nuevos medicamentos, e ingresos a las empresas (Baker *et al*., 1995; en Kate, 1995; Mugabe *et al*., 1997; Reid *et al*., 1993). Estos puntos de vista son adoptados por muchas organizaciones conservacionistas (Jeanrenaud, 1998), así como por quienes participan directamente en la promoción y realización de actividades de bioprospección. Por tanto, el mensaje principal del discurso de la bioprospección es que esta ofrece oportunidades para una situación en la que todos salen ganando. Sin embargo, se reconoce que un prerrequisito crítico para la realización de los beneficios es un entorno institucional apropiado en los países de origen.

Las narrativas dentro de este discurso se presentan en forma de casos para mostrar cómo la bioprospección puede conducir a una utilización sostenible de los recursos biológicos. Suelen ser historias presentadas por actores implicados, y a menudo están escritas en un estilo académico. Una historia que se cuenta a menudo se refiere al acuerdo de 1991 entre el instituto costarricense INBio y la empresa farmacéutica estadounidense Merck.

El INBio recibió 1.1 millones de dólares por la recogida y preparación de muestras para Merck, y acordó que 10% de los beneficios iniciales y 50% de las regalías se entregarían a instituciones para promover la conservación en Costa Rica (Mateo, 2000; Reid *et al*., 1993).

Shaman Pharmaceuticals y su organización afín, The Healing Forest Conservancy, también han elaborado una serie de relatos de este tipo basados en sus propias experiencias con la bioprospección y el reparto de beneficios.[12] Una característica exclusiva de estos relatos es la caracterización de los intercambios con el término *reciprocidad*. Además, mientras que INBio hace hincapié en la conservación como objetivo principal de los beneficios, en la descripción que hace Shaman Pharmaceuticals de los receptores de los beneficios el énfasis se pone en los llamados pueblos "indígenas, tribales o nativos" (Moran, 1997: 246). Shaman Pharmaceuticals ha presentado sus propias historias sobre bioprospección y reciprocidad a partir de experiencias en países como Ecuador, Belice, Nigeria y Tanzania.

Los relatos sobre bioprospección identifican dos grupos de héroes. El primero está formado por los propios bioprospectores, que comparten los beneficios con los receptores de los países de origen. El segundo grupo incluye a los curanderos locales y otras personas que aportan conocimientos sobre plantas medicinales y conocimientos tradicionales sobre el uso de las plantas, y que de este modo promueven inadvertidamente la conservación. La bioprospección se considera una de las soluciones a las circunstancias en las que las actividades económicas locales causan de manera indirecta la pérdida de biodiversidad. Estas narrativas se concentran en la bioprospección como actividad positiva, y no se identifican villanos o víctimas directas.

En la vanguardia de la construcción del discurso de *la biopiratería* se encuentra un grupo de ONG encabezadas por la Rural Advancement Foundation International (RAFI) en Norteamérica y Genetic Resources Action International (GRAIN) que opera desde Europa. La metáfora de la "biopiratería" señala una actividad que implica el saqueo de personas y países pobres. RAFI inventó el término como respuesta al discurso empresarial recogido en el libro de Reid *et al*. (1993), (Mooney, 2000).

12 Desde 1999, ShamanBotanicals.com constituye la principal división operativa de la empresa.

En 1994, RAFI se refirió a la preocupación de los países del Norte (sobre todo de Estados Unidos) por la pérdida de regalías debido a la piratería de productos farmacéuticos y químicos agrícolas. RAFI compara esto con lo que calcula como una pérdida mayor para el Sur debido a la "piratería inversa" del Norte por su uso de semillas y medicinas procedentes de la biodiversidad del Sur (RAFI, 1994). En 1995, RAFI calificó la biopiratería de "pandemia mundial" (RAFI, 1995). Afirmaban que "hay pocos lugares en la Tierra donde la población rural no se enfrente a biopiratas que pretendan extraer sus conocimientos y recursos" (RAFI, 1995). La activista india Vandana Shiva ocupa un lugar central en las redes de ONG que se oponen a las actividades de las empresas multinacionales en el ámbito de la bioprospección para el desarrollo de cultivos alimentarios y fármacos. En *Biopiracy: the plunder of nature and knowledge* (Shiva, 1997), compara las tendencias actuales de la bioprospección, la biotecnología y los derechos de propiedad intelectual con los descubrimientos, la piratería y la colonización anteriores.

El mensaje del discurso de la biopiratería puede resumirse en una vehemente resistencia a la recolección comercial, el desarrollo y la patente de medicinas modernas a partir de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales del Sur. Los defensores de este discurso hacen hincapié en cuestiones de derechos y equidad para los pueblos indígenas, los campesinos locales y los curanderos. No creen que la bioprospección proporcione beneficios satisfactorios a estos grupos. Las narrativas pueden centrar la atención en diferentes etapas del proceso de bioprospección, pero todas constituyen ejemplos en los que la bioprospección y las patentes acaban inevitablemente en explotación. Se han elaborado varios relatos con ejemplos concretos de biopiratería. La historia de éxito de los ponentes de la bioprospección del acuerdo de 1991 entre el INBio y Merck se ha enfrentado a una contranarrativa en la que los beneficios para Costa Rica se perciben como escasos, y que se centra en la falta de beneficios para los pueblos indígenas (Kloppenburg y Rodríguez, 1992; Mooney, 2000).

La actividad de Shaman Pharmaceuticals también ha generado narrativas dentro del discurso de los opositores a la biopiratería. La sangre de drago (género *Croton*) es ampliamente utilizada como agente curativo

para diversos fines por los pueblos indígenas de las selvas tropicales de América Latina. Los chamanes la están desarrollando para obtener nuevos productos. En el boletín de GRAIN, Reyes (1996) examina la política de reciprocidad de Shaman Pharmaceutical en el caso de la sangre de drago. Sostiene que la empresa ofrece una compensación cuestionable por los conocimientos indígenas. RAFI y Cultural Survival Canada identifican a las empresas de bioprospección como villanos en una serie de panfletos titulados *BioPirates*:

> Mientras que Shaman Pharmaceuticals ha recaudado millones en el mercado de capitales estadounidense gracias a sus éxitos en bioprospección, la comunidad quichua de Jatún Molino, en el este de Ecuador, una de las comunidades donde Shaman recogió sangre de drago y los conocimientos sobre cómo utilizarla, ha recibido menos de 3 000 dólares de Shaman, siendo gran parte de este dinero el pago por el trabajo y los servicios de los miembros de la comunidad (RAFI / Cultural Survival Canada, 1997).

La narrativa de la biopiratería sobre sangre de drago aporta críticas a patentes específicas, así como a la relación de Shaman Pharmaceutical con grandes transnacionales farmacéuticas, como Eli Lilly (Reyes, 1996: 17).

Los héroes en las narrativas de la biopiratería son los pueblos indígenas, los curanderos tradicionales, los campesinos y otras personas que poseen conocimientos tradicionales sobre las propiedades medicinales de las plantas. En el discurso de los defensores, los bioprospectores se encuentran entre los héroes, mientras que en el discurso de la biopiratería los bioprospectores son etiquetados como biopiratas y considerados villanos. Otros participantes extranjeros en la bioprospección también pertenecen a este grupo, en particular las empresas multinacionales, una categoría considerada como la encarnación del capitalismo global y sus impactos negativos. Llama la atención el uso de metáforas fuertes. Los términos como *biopiratería*, *colonialismo*, *saqueo* y *explotación* crean la imagen de una actividad poco ética e incluso delictiva. Los pobres locales, y en particular los indígenas, son vistos como víctimas.

En Tanzania se han investigado las percepciones locales y los efectos ulteriores de la bioprospección por parte de Shaman Pharmaceuticals (Svarstad, 2000; Svarstad, en prensa). El estudio de campo revela percepciones locales del fenómeno de la bioprospección que en cierto modo están en desacuerdo tanto con las narrativas de la biopiratería como con las de los defensores de la bioprospección. Los curanderos tradicionales tienden a expresar ambivalencia respecto a sus experiencias con la empresa. La imagen que tienen de sí mismos como científicos locales ha hecho que estén deseosos de participar en la bioprospección para disfrutar de conocimientos científicos modernos con el fin de incorporar nuevos conocimientos sobre plantas medicinales a sus prácticas. El contacto entre los bioprospectores externos y los curanderos tradicionales también tiende a elevar el estatus y la legitimidad de estos últimos en la comunidad local. Por otra parte, los curanderos tradicionales que participaron en la investigación expresaron su decepción por la información que habían recibido hasta el momento de Shaman Pharmaceuticals, así como de otras visitas de bioprospectores tanzanos. En efecto, la investigación de campo no ha proporcionado información a partir de la cual sea apropiado construir una narrativa acorde con ninguno de los dos discursos. En su lugar, el estudio ilustra la necesidad de cualquier intervención —tanto por parte de bioprospectores como de grupos solidarios— y la necesidad de reconocer los contextos locales y las jerarquías sociales, así como las estrategias de uso de los recursos.

De hecho, existen diferencias notables en la presentación de la práctica de la bioprospección en ambos discursos y en las percepciones de los principales participantes. Sin embargo, ambos se centran en la situación del Sur pobre en contraste con el Norte rico y, en particular, expresan su apoyo a los pueblos locales e indígenas. Además, ambas se preocupan por la conservación de la biodiversidad.

En el caso de Tanzania, los representantes de Shaman Pharmaceuticals describieron las experiencias como un ejemplo de éxito en el que todos salían ganando. Sin embargo, los actores locales se mostraron decepcionados por el alcance de sus ganancias, y el estudio demuestra que esto se relacionaba con su falta de participación en la toma de decisiones reales. Por otro lado, la mayoría de los curanderos tradicionales en este caso ven

a la bioprospección como una oportunidad para alcanzar algunos de sus objetivos. Las acciones solidarias basadas en el discurso de la biopiratería intentan detener toda la actividad o elementos necesarios, como las patentes. Estas campañas hacen que la bioprospección resulte menos atractiva para la industria. De este modo, los actores locales —los curanderos, en el caso de Tanzania— pierden con las implicaciones del entorno político y normativo que promueve la bioprospección.

Cambio climático

El cambio climático mundial ocupa un lugar destacado en los debates sobre el cambio ambiental debido a su naturaleza verdaderamente global y a la omnipresencia de los intereses de la economía del carbono dentro del sistema económico mundial. Los Gobiernos del mundo acordaron en la CNUMAD que las posibles repercusiones del cambio climático son lo suficientemente importantes como para exigir una acción internacional coordinada mediante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero el desarrollo de esta cuestión ambiental global lleva a que el cambio climático y sus implicaciones sean ilegibles a otras escalas y, por tanto, se ignoren los mecanismos y procesos sociales por los que puede producirse la adaptación. Los principales discursos en este ámbito (siguiendo a Thompson y Rayner, 1998) promueven las ideas de gerencialismo y despilfarro. El discurso *gerencial* evoca el fracaso institucional y el crecimiento demográfico como causas del cambio climático y sugiere la acción internacional como solución. El discurso del *despilfarro* evoca el consumo excesivo como causa del cambio climático y sugiere que solo abordando esta cuestión fundamental se evitará la catástrofe mundial.

Los argumentos de la gestión y el despilfarro no existen aislados de las instituciones y los intereses que los promueven. Tampoco son estáticos. Thompson y Rayner (1998) sostienen que se ha producido una evolución significativa de estos discursos en la última década. Las voces que clamaban por ser escuchadas en los años ochenta presentaban sus argumentos principalmente en términos de la ciencia incierta del cambio climático. Los principales discursos de esa década pueden etiquetarse como preventivos y adaptativos: "Hay que hacer algo" frente

al "todos podemos adaptarnos". Por supuesto, estos argumentos siguen vigentes hoy en día, pero ahora están incorporados en narrativas alternativas, dominantes y emergentes. En la década de los noventa, los principales discursos en torno al cambio climático aceptaron cada vez más que este era una realidad y un problema importante. O'Riordan y Jäger (1996) sostienen que esta aceptación es el resultado tanto del avance científico como de la institucionalización del problema.[13] Los principales discursos del gerencialismo y del despilfarro difieren en su interpretación de la responsabilidad por el actual nivel de aumento del efecto invernadero, la equidad y la respuesta institucional.

El discurso de gestión domina el debate sobre el cambio climático. El fracaso institucional y político se considera la causa última del problema. Los reguladores de la energía no han adoptado políticas de precios correctas para los combustibles fósiles, y la falta de comprensión de la función de secuestro de carbono por parte de los sumideros como los bosques ha llevado a su sobreexplotación. Según el análisis de la economía del bienestar, es posible encontrar un nivel aceptable de cambio climático que pondere el coste marginal de los efectos del cambio climático con el coste marginal de reducirlo (Cline, 1992; Fankhauser, 1995). Esto exigiría un aumento significativo, y hasta ahora políticamente inaceptable, de los costes del uso de combustibles fósiles para reflejar la verdadera escasez de un clima mundial seguro.

Sin embargo, el discurso de los gestores del cambio climático también tiene elementos de argumentación neomalthusiana. Esta retórica se liga a la inevitabilidad de las cifras: las proyecciones sobre el tamaño de la población mundial y, en particular, sobre el crecimiento demográfico en los países en desarrollo, junto con las previsiones de aumento de los niveles de consumo per cápita en estos países, hacen que la población sea un motivo de preocupación para los responsables políticos mundiales. Thompson y Rayner (1998) esbozan estos argumentos demográficos y analizan los pronunciamientos políticos en este ámbito. Demuestran que, aunque se acepte que la responsabilidad del cambio climático es compartida entre el mundo industrializado y el mundo en desarrollo, la responsabilidad de actuar en materia de población recae en

13 La institucionalización de la ciencia del clima se manifiesta en lo que Jassannoff y Wynne (1998) han denominado la "normalización de la ciencia" en este ámbito.

el mundo en desarrollo. Además, las principales consecuencias del cambio climático recaerán en los países en desarrollo pobres, ya que estos carecen de la tecnología o los recursos necesarios para hacerles frente. Entre las consecuencias secundarias, cabe citar las migraciones internacionales a gran escala provocadas por los desplazamientos de población debido al incremento del nivel del mar o a la sequía, con el consiguiente espectro de inmigración a gran escala hacia los países ricos del Norte.

El discurso de gestión extrae su autoridad de la ciencia. Se basa en el aparente consenso científico que sugiere que el cambio climático es una realidad global —es una "certeza científica" y no podrá evitarse (Parry *et al*., 1998; Wigley *et al*., 1996)—. Por tanto, el mundo se compromete a adaptarse a un sistema climático modificado en todas sus manifestaciones. Esta línea de argumentación, basada en evaluaciones globales como la del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sugiere que debemos emprender acciones de precaución frente al cambio climático porque los impactos son significativos y diferenciados. Las soluciones al problema del cambio climático ya se han mencionado antes: fijar un precio adecuado para el carbono; basarse en los avances científicos para perfeccionar la comprensión de las repercusiones del cambio climático y los costes de adaptación, y buscar nuevos mercados y derechos de propiedad para dar un papel al sector privado (Chichilinsky y Heal, 1998).

El discurso del despilfarro culpa de forma directa al mundo industrializado del cambio climático. Es aquí donde la economía del carbono se ha desbocado, fomentando patrones de consumo derrochadores y provocando indirectamente cambios en el uso de la tierra. Además, son los países industrializados del Norte los que han llevado a cabo cambios históricos en el uso de la tierra y, por tanto, han aumentado las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, sobre todo en el siglo XIX (Adger y Brown, 1994). Este discurso también extrae su autoridad tanto de la ciencia como de un imperativo moral. Los defensores de este discurso, a menudo centrados en torno a ONG como la Red de Acción por el Clima, destacan la ciencia en el ámbito del IPCC, por ejemplo, que hace hincapié en la irreversibilidad y las sorpresas catastróficas plausibles en el sistema climático. Del mismo modo, la responsabilidad de causar el cambio climático se presenta como un argumento moral. En la década

de los noventa, investigadores y activistas del Sur destacaron con éxito la responsabilidad histórica y la "deuda natural" de los países industrializados en el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (Agarwal y Narain, 1991; Hayes y Smith, 1993).

Las cuestiones de justicia del cambio climático están volviendo a cobrar importancia a medida que los impactos del cambio climático se hacen más ciertos (Adger, 2001). Las soluciones al cambio climático que se plantean desde este discurso son, por tanto, diametralmente opuestas al discurso empresarial. Los activistas de las ONG climáticas han rechazado de forma enérgica, por ejemplo, la aplicación de las medidas para el comercio de carbono inherentes al Protocolo de Kioto de la Convención sobre el Cambio Climático, con el argumento de que plantar árboles en los países en desarrollo para compensar las emisiones de los países industrializados derrochadores es una abdicación de la responsabilidad (Brown y Adger, 1994). Reclaman medidas preventivas y, de hecho, un nuevo orden económico (Newell, 2000). El uso de estos discursos en las negociaciones internacionales refleja claramente la naturaleza multinivel de la ecología política del cambio climático. Los grupos de presión se crean, se disuelven y se vuelven a formar en el ámbito del cambio climático apelando a estos discursos. Los efectos a largo plazo del cambio climático, sobre todo en la viabilidad de los pequeños Estados insulares de baja altitud, por ejemplo, se presentan como una cuestión intergeneracional, y la Asociación de Estados de Pequeñas Islas y otras organizaciones ejercen una fuerte presión colectiva.

Se trata de relatos muy estilizados, pero que no dejan de reflejar los dos principales discursos (el de la gestión y el del despilfarro) dentro del debate sobre el cambio climático. Ambos discursos tienen en común su dependencia de la evaluación científica a escala mundial o continental. No articulan los procesos sociales de adaptación, ni son articulados por ellos. También se manifiestan en las instituciones que integran la Convención sobre el Cambio Climático. Los discursos en torno al cambio climático están implícitos en los resultados de los acuerdos internacionales. Las Conferencias de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático, desde Buenos Aires en 1998, han vinculado de manera directa la adaptación a la mitigación en términos de costes para la sociedad. El mayor problema de equidad, y el fantasma que ensombrece todos los debates sobre qué hacer frente al cambio climático, es el

de los impactos diferenciales del cambio climático y los muy desequilibrados costes de adaptación entre la escala mundial y la local. La vulnerabilidad de las sociedades a los impactos climáticos y los costes de adaptación ponen de manifiesto algunos debates pertinentes sobre la equidad social debido a la naturaleza incierta y a largo plazo de los impactos.

Gran parte de la ciencia a la que apelan ambos discursos se resume en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).[14] Pero este análisis a escala global, basado en la creencia de que es necesaria una intervención y una gestión global del problema, no tiene en cuenta los procesos de adaptación. Los mecanismos por los que se promueve la adaptación al cambio y la variabilidad climática se relacionan, en realidad, con la economía política del uso de los recursos. Pueden observarse al mismo tiempo impactos diversos y contradictorios sobre la capacidad de adaptación. Los cambios en el uso de los recursos en las zonas costeras pueden aumentar o reducir la capacidad de adaptación. Un estudio realizado en Vietnam, por ejemplo, demuestra cómo la reestructuración de la propiedad y el control de los recursos costeros en todas las provincias costeras de Vietnam, sumado a la reducción de la acción colectiva en estas zonas, se traduce en un entorno cada vez más peligroso para los residentes costeros y, por tanto, agrava la vulnerabilidad al cambio climático (Adger, 1999). Al mismo tiempo, la rehabilitación de los manglares costeros para proteger la costa de las tormentas actuales está mejorando la capacidad de adaptación de estas zonas. Así pues, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación están determinadas por las instituciones y dependen del capital social.

Sostenemos que la vulnerabilidad y la adaptación no son legibles ni para el discurso de gestión dominante ni para el populista alternativo, que presentan a las sociedades como frágiles y sin poder hacer frente al cambio climático global. El discurso de gestión dominante presenta el cambio climático como un fenómeno monolítico no diferenciado y a las comunidades dependientes de los recursos como víctimas desventuradas de los impactos. Las pruebas de las repercusiones del cambio climático son cada vez más numerosas, como se señala en el Tercer

14 El informe de la Tercera Evaluación del IPCC se resume para los responsables políticos en http://www.ipcc.ch/

Informe de Evaluación del IPCC de 2001, pero la adaptación local a los cambios globales sigue siendo opaca para los discursos globales.

Comparación de discursos

A continuación, tratamos de establecer los paralelismos y las principales diferencias entre los discursos sobre los cuatro temas ambientales. Por medio de una comparación de los mensajes, las estructuras narrativas y el papel de las intervenciones externas percibidas en los discursos, hemos identificado dos grupos de discursos principales. Se trata de un conjunto de discursos de gestión medioambiental global (GEM) que dominan en términos de influencia en las políticas ambientales y un conjunto de discursos populistas que constituyen reacciones contra los primeros y también tienen considerables repercusiones políticas. Los principales argumentos se resumen y estilizan en la Tabla 1. Ambos grupos perciben la existencia de problemas ambientales globales. La mayoría de los discursos populistas tienden a preocuparse más por las repercusiones locales negativas de las intervenciones de agentes externos relacionados con la conservación y el uso de los recursos naturales. Las causas y curas que implican ambos grupos son diametralmente opuestas. Al final, se analiza un tercer grupo de ideas heterodoxas y reclamaciones de negación.

En cada una de las áreas ambientales tratadas con anterioridad, el discurso dominante identificado afirma la existencia de una crisis ambiental global en las respectivas áreas. Esta afirmación está respaldada por un conjunto de análisis científicos internacionales, como la *Evaluación mundial de la biodiversidad*, el *Atlas mundial sobre desertificación* y las publicaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Las crisis ambientales globales que implican los discursos de la GEM requieren soluciones globales. Los discursos son, por tanto, descendentes, intervencionistas y tecnocentristas en el sentido de que se pueden y se deben idear soluciones a los supuestos problemas ambientales globales. Las soluciones se definen a escala mundial. Por tanto, es necesaria una acción internacional. Esta acción debe estar coordinada por agencias multilaterales y marcos reguladores. Cuando los problemas se presentan como el resultado de interacciones entre países (que son actores racionales motivados por el propio interés nacional), la acción global se interpreta

de forma inevitable como la acción de un conjunto de actores estatales (Kaul *et al*., 1999; Rowlands, 1995; Sandler, 1997). Aunque en los discursos de la GEM se hace hincapié en el papel de los Estados, es esencialmente neoliberal al propugnar soluciones orientadas al mercado. Elliot (1999: 1) sugiere que los discursos de la GEM se basan, en esencia, en valores neoliberales: las respuestas políticas internacionales a los retos globalizados del cambio ambiental se han acomodado a los valores y modalidades neoliberales y se han basado en ellos. Esta ortodoxia neoliberal se ha visto confirmada por las respuestas analíticas y teóricas dominantes a la agenda ambiental.

Tabla 1. Características de los discursos gerenciales y populistas en cuestiones medioambientales globales.

	Discursos sobre la gestión ambiental global (GEM)	**Discursos populistas**
Deforestación	Discurso neomalthusiano sobre el aumento de la población y la conversión agrícola en los países en desarrollo, en el que los agricultores que practican la tala y quema son los principales villanos.	El discurso populista considera que la deforestación es un problema importante causado por la marginación de la población rural pobre y por fuerzas externas de la globalización, como el consumo de productos madereros en el Norte.
Desertificación	El discurso neomalthusiano sugiere que los usuarios locales de los recursos en las zonas áridas están degradando los ecosistemas de los que dependen. Solo la acción internacional y una regulación estricta pueden evitar una mayor desertificación.	El discurso populista acepta la evidencia de que la desertificación es importante, pero sugiere que es la consecuencia inevitable de la marginación histórica de los pastores y los pequeños agricultores tanto en el periodo colonial como en el poscolonial.
Uso de la biodiversidad	El discurso sobre la bioprospección promueve la utilización sostenible de la biodiversidad como solución a una crisis de extinción inminente. Esta solución puede promoverse a través de la cooperación internacional y las instituciones.	El discurso sobre la biopiratería describe una crisis de extinción promovida por las instituciones y los intereses del capitalismo que amenazan tanto la diversidad cultural como la biológica.
Cambio climático	Discurso gerencial sobre la convincente ciencia del cambio climático que requiere nuevos mercados para el carbono e instituciones globales.	El discurso sobre el despilfarro también acepta el cambio climático como un problema importante y como el síntoma clave de la crisis de consumo excesivo global que propugna el capitalismo.

Así, las instituciones generadas a partir de estos procesos propugnan soluciones mediante transferencias tecnológicas y de recursos. Este discurso GEM resuena con conceptos como el de modernización ecológica que, según Hajer (1995), es un discurso hegemónico sobre las cuestiones ambientales del Norte. La existencia de políticas e instituciones "beneficiosas para todos" es un concepto clave de los discursos de gestión. En diversos ámbitos, desde el cambio climático hasta los canjes de deuda por naturaleza, se utiliza esta retórica, a menudo vinculada a soluciones tecnológicas e incluso a transferencias de tecnología Norte-Sur. Estas soluciones beneficiosas para todos se institucionalizan mediante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por ejemplo, que promueve proyectos por sus beneficios ambientales globales (Rich, 1994). El discurso de gestión se basa en el optimismo desarrollista y en la fe en las oportunidades de obtener beneficios locales en los países pobres mediante intercambios con partidos privados y públicos de los países industrializados.

En contraste, los discursos populistas identificados en la Tabla 1 también incluyen la creencia en crisis inminentes, pero sus narrativas se basan en que los perpetradores son el capitalismo global y las víctimas son los usuarios locales de los recursos, que son los villanos del discurso de gestión. Las relaciones económicas internacionales, incluida la ayuda internacional para el desarrollo, se describen como intervenciones negativas y neocolonialismo, en lugar de ofrecer posibilidades de comercio, ingresos y conservación. Los conocimientos locales y tradicionales se consideran proveedores de prácticas sostenibles, por lo que la población local estará mejor si se la deja en paz. Las raíces filosóficas de los discursos populistas sobre cuestiones de desarrollo se remontan a la defensa de la autosuficiencia derivada de las escuelas de dependencia de los años setenta y ochenta y, más allá, a los escritos de Chayanov y otros. En la década de los noventa surgió una tendencia de escritos posestructuralistas dentro de este discurso en los que se rechazan categóricamente el desarrollo y la intervención extranjera (Peet y Watts, 1996; Yapa, 1996).

Mensajes y estructuras narrativas en los discursos de gestión y populismo

Aquí comparamos los discursos del GEM y del populismo con respecto a sus mensajes, estructuras narrativas (es decir, su elenco de héroes, villanos y víctimas) y sus puntos de vista sobre la intervención externa y las soluciones. Tanto en el discurso del GEM como en el del populismo se aprecian dos mensajes claros en relación con los problemas ambientales descritos antes, que se ilustran y expresan mediante las narraciones. El primer mensaje común presenta el problema ambiental como una crisis (Roe, 1991; 1995; 1999) asociada a cambios irreversibles y sistémicos en el ambiente. El cambio irreversible es evidente tanto en los discursos del GEM como en los populistas en cada una de las cuatro áreas. El segundo mensaje común en los discursos del GEM y populistas es que los cambios del entorno físico tendrán inevitablemente graves ramificaciones sociales, económicas y políticas. Los discursos sobre el cambio climático, la desertificación y la deforestación llevan asociados relatos sobre los "refugiados ambientales" resultantes de los cambios bruscos del ambiente.[15] Los discursos sobre la pérdida de biodiversidad mencionan las medicinas potenciales que aún no se han descubierto y que podrían perderse para siempre. En todos los casos, se da a entender que la humanidad, y no solo la biosfera, sufrirá las consecuencias de estos problemas ambientales.

La comparación de las estructuras narrativas asociadas a los discursos dominantes en las cuatro áreas es más compleja, y los discursos GEM y populista difieren de forma notable. Hay temas comunes en los discursos del GEM sobre deforestación, desertificación y cambio climático. Los agricultores locales, los campesinos y los pobres sin tierra son retratados como villanos en cada uno de ellos. Este es en especial el caso de los discursos neomalthusianos sobre la desertificación y la deforestación. Los agricultores locales y los usuarios de la tierra son considerados como los principales causantes de estos problemas. En el discurso del GEM sobre el cambio climático, los agricultores pobres del arroz y de las zonas agrícolas fronterizas, a pesar de ser poco consumidores de energía, son presentados como villanos, ya que sus actividades provocan la emisión de gases de efecto invernadero mediante el cambio en el uso de

15 Véase Homer-Dixon (1994) y las críticas de Hartmann (1998) y Barnett (2000; 2001), por ejemplo.

la tierra y, por tanto, se argumenta que contribuyen de forma significativa al problema global.

En los discursos de GEM, la población local también es víctima: puede que se vea sometida a una actividad perjudicial para el ambiente sin tener culpa de ello y también es víctima del propio problema. A menudo esto se expresa en narraciones que describen "círculos viciosos" de pobreza y degradación ambiental. Son frecuentes en los discursos sobre la desertificación y la deforestación. Los héroes, según estos discursos, serían científicos, funcionarios nacionales, burócratas de los programas de ayuda y otros que han comprendido los ciclos viciosos y que ven la necesidad de actuar con urgencia. Estos héroes son, evidentemente, también los principales promotores de los discursos de GEM dentro de la deforestación y la desertificación. El discurso de GEM sobre la bioprospección también se basa en la misma concepción de la población local como villana y víctima de la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, en los relatos sobre la bioprospección, la población local y los bioprospectores aparecen como héroes en un intercambio armónico.

Los discursos populistas de cada zona presentan al capitalismo global, las empresas transnacionales y las potencias coloniales como villanos. Así, las empresas madereras, los ganaderos y los propietarios de plantaciones son los principales agentes causantes de la deforestación; las condiciones comerciales desiguales obligan a los países del Sahel a producir algodón y cacahuates, lo que provoca el agotamiento del suelo y la desertificación, y las empresas farmacéuticas son biopiratas. Los discursos sobre el cambio climático y la deforestación, y en cierta medida los relativos a la biodiversidad y la desertificación, también identifican a los consumidores del Norte como villanos: es el despilfarro del Norte el que causa el problema ambiental mundial, mientras que los pobres del Sur son a la vez víctimas y héroes.

Interacciones entre discursos y resultados políticos

La sabiduría aceptada, el conocimiento y la investigación científica en cada una de las áreas se utilizan como justificaciones para las políticas y las intervenciones. Los discursos de GEM y populistas en cada una de las cuatro

áreas ven el papel de la intervención externa de forma bastante diferente. En general, los discursos populistas ven la intervención externa como parte del propio problema. Este es en particular el caso de los discursos populistas sobre la deforestación, la desertificación y la biopiratería. En estos ámbitos, la penetración de actores externos ha causado o agravado los problemas ambientales. Los discursos populistas dentro de cada área ven a la comunidad local y a las poblaciones indígenas como el foco de acción apropiado. Los discursos populistas hacen hincapié en los derechos, la justicia, la autodeterminación y el empoderamiento como medios para superar los problemas ambientales a largo plazo.

Por otro lado, los discursos de GEM en cada una de las cuatro áreas consideran la intervención externa como una característica clave de las soluciones para los problemas ambientales. Podemos distinguir cuatro tipos de intervención externa aliados con el discurso GEM. El primer tipo de intervención es la transferencia de tecnología o conocimientos. Estas transferencias son evidentes en las soluciones de GEM a la desertificación y el cambio climático, y menos explícitas en el caso de la deforestación. El segundo tipo de intervención se refiere a las transferencias financieras o pagos compensatorios y es común a todos los temas. Se fomentan los pagos financieros, por ejemplo, para la conservación de los bosques y la biodiversidad, para apoyar la adopción de "tecnologías limpias" y para incentivar a los agricultores a adoptar prácticas de conservación del suelo. Entre las formas institucionales de los mecanismos de mercado se hallan el mecanismo de desarrollo limpio de la Convención sobre el Cambio Climático y los "canjes de deuda por naturaleza" en conservación.

El tercer tipo de intervención propugnada por los defensores de los discursos de GEM se relaciona con los incentivos financieros, ya que abogan por el fortalecimiento y la creación de mercados y por la valoración o fijación de precios correctos de los recursos para provocar cambios en su gestión. Este tipo de intervención se asocia especialmente a los discursos sobre la deforestación, la biodiversidad y el cambio climático, en los que se intenta crear mercados y fijar precios "correctos" para tener en cuenta las externalidades (véase Pearce, 1995, para una revisión). Esta intervención, la creación de mercados, es menos prominente en los discursos sobre desertificación. El

cuarto tipo de intervención lo comparten las cuatro áreas y es fundamental para la visión del GEM. Se trata de la percepción de que los acuerdos y la regulación internacionales son fundamentales para mitigar los problemas ambientales mundiales. En los ámbitos del cambio climático, la biodiversidad y la desertificación, se actúa mediante las convenciones de la ONU, y en el ámbito de la deforestación, por parte de instituciones como el Foro Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los Bosques y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. Estas convenciones e instituciones representan el resultado de la dominación de este discurso, pero al mismo tiempo refuerzan de continuo la hegemonía de la visión GEM. Ningún debate sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la desertificación, ni siquiera en el contexto local, puede hacerse sin hacer referencia a estos imperativos globales.

En nuestro debate, hemos hecho hincapié en las diferencias entre los discursos GEM y populista. Sin embargo, también se puede argumentar que estos discursos a veces presentan puntos difícilmente distinguibles, y que se solapan y redefinen una y otra vez. Los discursos no pueden considerarse constantes. El discurso populista sobre la deforestación, por ejemplo, se introduce por los márgenes en el discurso de GEM de varias maneras. Un ejemplo es la iniciativa sobre las "Causas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal", que permitió a ONG y organizaciones comunitarias contribuir a las negociaciones intergubernamentales sobre política forestal.[16] Las declaraciones de la iniciativa identifican la falta de seguridad en la tenencia, la ausencia de derechos de los pueblos indígenas, la privatización de los bosques y la falta de capacitación y participación de las comunidades locales en las decisiones sobre la gestión forestal como factores causales clave de la deforestación. En este sentido, se inscribe firmemente en el discurso populista. La iniciativa ha intentado, sobre todo, que la deforestación deje de ser un problema exclusivo de

16 Estas deliberaciones políticas tuvieron lugar en el marco del Grupo Intergubernamental sobre los Bosques (que más tarde se convirtió en el Foro Intergubernamental sobre los Bosques), creado tras la CNUMAD, bajo los auspicios de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU, con el fin de establecer un diálogo y un proceso para buscar un consenso internacional sobre la gestión de los bosques. Las recomendaciones del Foro Intergubernamental se presentaron en la octava sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU en abril de 2000.

los países tropicales para centrarse en la degradación de los bosques de los países ricos del Norte. Pero al "optar" por el proceso del Foro Intergubernamental sobre los Bosques, pretende influir en la agenda política prescrita por el discurso de la deforestación del GEM.

El discurso populista sobre la deforestación también ha promovido enfoques comunitarios de conservación y gestión forestal. Esto puede verse en el énfasis que ponen los proyectos bilaterales y multilaterales de conservación y desarrollo en lo que podríamos denominar enfoques comunitarios de la gestión forestal. Las grandes ONG conservacionistas internacionales también han adoptado las narrativas y la retórica de los discursos populistas a la hora de promover proyectos de conservación y desarrollo orientados a las personas y de formar alianzas con organizaciones de pueblos indígenas (Brown y Rosendo, 2000; Jeanrenaud, 1998).

Se observan tendencias similares en los debates en torno a la desertificación, donde los enfoques populistas basados en la comunidad han sido cooptados por las políticas estatales y de los donantes. Esto ha dado lugar al conocido enfoque *gestion de terroir*, defendido en todo el Sahel de África Occidental como remedio contra la desertificación. En la misma línea, todos los Estados saheliano francófonos están aplicando en la actualidad reformas de descentralización fomentadas por los programas de ajuste estructural. Un objetivo importante de estas reformas es mejorar la gestión de los recursos naturales mediante una mayor participación de las comunidades. La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación también pone especial énfasis en la descentralización. Queda por ver, sin embargo, si estas iniciativas conducirán a la devolución del poder real de decisión a las bases o si el resultado será simplemente una desconcentración del poder estatal (Benjaminsen, 1997b; 2000; Ribot, 1999; Turner, 1999).

Ideas heterodoxas y reivindicaciones de negación

En cada uno de los ámbitos del cambio ambiental global examinados existe un conjunto de ideas heterodoxas e incluso afirmaciones de negación en cuanto a la existencia o la gravedad del problema ambiental. Estas rei-

vindicaciones de negación son más fuertes en los debates sobre el cambio climático y la desertificación, donde los intereses creados tratan de negar el conocimiento señalando aparentes incoherencias en las pruebas empíricas o haciendo explícitos los intereses en los discursos dominantes. En cuanto al cambio climático, sostenemos que existe un discurso negacionista establecido que tiene cierta influencia: una voluble opinión minoritaria sostiene que el calentamiento global no es científicamente demostrable o que no es un problema serio.

Se trata de una opinión minoritaria, pero que ha influido en la geopolítica del cambio climático. El discurso de la negación sostiene que el cambio climático no es un problema. Sugiere que la adaptación al cambio climático se producirá de forma natural, como ha ocurrido en la evolución de las sociedades a lo largo de los siglos (Burroughs, 1997). Esta línea de razonamiento utiliza otras dos observaciones para argumentar que el problema del cambio climático global es intrascendente. En primer lugar, la ciencia del cambio climático observado es incierta y esta incertidumbre apunta a un aplazamiento del abordaje de la cuestión para optimizar el mejor uso de los escasos recursos actuales. Beckerman (1995), por ejemplo, sostiene que la adaptación al cambio climático se ha producido en el pasado mediante la migración humana. Refiriéndose a la migración voluntaria para aprovechar un clima agradable, que puede observarse por ejemplo en los estados del "cinturón solar" del sur de EE.UU, señala que "el calentamiento global podría significar que las generaciones futuras no tendrían que tomarse todas las molestias [de emigrar]" (Beckerman, 1995: 91). Beckerman también argumenta que posponer las medidas de precaución no pone en peligro la capacidad de hacer frente a futuros índices potenciales de calentamiento: retrasar las medidas una década significa que "todos tendríamos tiempo de sobra para ponernos camisas más ligeras" (1995: 100). En esta línea de razonamiento, las tasas potenciales de cambio climático futuro no plantean problemas significativos. En segundo lugar, una acción política pública significativa para reducir las causas del cambio climático es costosa. Por tanto, según este argumento, la asignación de recursos para mitigar el cambio climático no es equitativa para los que necesitan "desarrollo" hoy en día. El conjunto de estas percepciones lleva a la conclusión de que, aunque haya

algún motivo de preocupación, cualquier acción debe posponerse hasta que se reduzca la incertidumbre científica (Manne y Richels, 1992).

Dentro de la desertificación, también existe un discurso de negación. Tiene una posición fuerte entre los investigadores, pero hasta ahora solo un impacto político marginal. Este discurso sostiene que la acción humana de agricultores y pastores no está causando una desertificación o degradación de la tierra generalizada en las tierras secas y que si existen tendencias negativas a largo plazo, estas serían causadas principalmente por la disminución de las precipitaciones. Sin embargo, las tendencias a largo plazo de las precipitaciones son discutibles y varían mucho según la región y la escala temporal elegida.

Dentro del debate sobre la deforestación, está surgiendo una visión alternativa y crítica que cuestiona que la deforestación sea un problema mundial y afirma, por ejemplo, que son exagerados los índices presentados por la ortodoxia de la deforestación. Algunos de estos análisis ponen de manifiesto que los discursos dominantes ocultan las complejas interacciones entre las personas y su entorno (Fairhead y Leach, 1998) mientras que otros tratan de desacreditar la idea de una crisis forestal mundial (Stott, 1999). Mientras que las opiniones contrarias a la deforestación tienen claras influencias populistas y tienen como héroes a la población rural del Sur, la negación de la existencia del cambio climático global tiende a estar promovida por los intereses económicos del Norte. En cuanto a la biodiversidad, hay intentos de refutar fundamentalmente las pérdidas de especies, pero la política de conservación vinculada a estos debates es en gran medida un asunto de las agendas nacionales de determinados países, como el *lobby* del "uso racional" en Estados Unidos (Lomborg, 1998; Stott, 1999). Así pues, la dicotomía que destacamos, la de los discursos gerencial y populista, es en sí misma muy estilizada. Los puntos de vista alternativos, que a veces tratan específicamente de mostrar la pobreza de los discursos monolíticos, también compiten por hacerse oír en esta importante esfera.

Conclusiones

Este artículo ha examinado cuatro cuestiones ambientales en apariencia globales y ha identificado en ellas dos discursos enfrentados. En cada uno de los ámbitos de la deforestación, la desertificación, la biodiversidad y el cambio climático es evidente el predominio de la gestión medioambiental global en los debates sobre estas cuestiones. Domina lo que Brosius (1999) ha denominado el "espacio político globalizado" del ámbito ambiental. Este grupo de discursos domina las instituciones y políticas que rodean los acuerdos internacionales y los planes globales, y propugna la acción coordinada global y la creación de nuevos mercados y derechos de propiedad para resolver las crisis del cambio ambiental global. Cada una de las áreas tiene también un discurso populista competidor, a menudo constituido por medio de organizaciones no gubernamentales y en alianza con determinados grupos de interés estatales o sectoriales. Definimos estos discursos como populistas por la forma positiva en que retratan los actos de la población local, y su imagen negativa sobre las intervenciones extranjeras.

Por supuesto, esta dicotomía está altamente estilizada. Hay muchas voces alternativas en el ámbito del cambio ambiental global, y los discursos se reformulan de forma constante. Por ejemplo, a menudo se intenta establecer la autoridad mediante la interpretación de los últimos análisis científicos. También hacemos referencia a una tendencia en el cambio ambiental global de incursiones de los discursos populistas en el territorio de la gestión global, mediante la inscripción de actores periféricos y alianzas con las instituciones dominantes. La negación de la existencia o de la gravedad del problema ambiental puede encontrarse en todos los ámbitos. Con excepción del ámbito del cambio climático, estas narrativas minoritarias no han logrado influir en los debates políticos hasta la fecha.

La convergencia de algunos discursos gerencialistas y populistas puede verse en algunos aspectos como la consecuencia inevitable de sus puntos en común en la forma de ver el mundo y la sociedad. En muchos casos, aunque no en todos, las ideas dominantes dentro del cambio ambiental global se basan en la creencia de que estamos al borde de la catástrofe global, poniendo a prueba una tierra frágil y arriesgándose a un cambio irreversible. Al

mismo tiempo, la mayoría de los discursos que hemos examinado también consideran a la sociedad global, y a las sociedades del mundo en desarrollo en particular, asimismo frágiles, y a estos países como víctimas desventuradas de la globalización y el cambio.

Hemos proporcionado ejemplos en cada una de las cuatro áreas que muestran las deficiencias de los discursos identificados a la hora de proporcionar marcos satisfactorios para comprender los problemas, las soluciones y acciones concomitantes en casos concretos. Así pues, una de las principales conclusiones de nuestra investigación es que existen notables discrepancias entre las simplificaciones discursivas y la diversidad de situaciones en los contextos locales. Estos contextos locales son en gran medida ilegibles a través de los lentes de los dos principales discursos ambientales analizados en este artículo. Esta ilegibilidad y simplificación de la realidad se vinculan a los intentos de legibilidad, normalización y simplificación articulados en el contexto de la modernización del Estado de acuerdo con Scott (1998). Los diseños simplificados resultantes para la organización social y la gestión ambiental pueden verse como consecuencias lógicas de los discursos más amplios que tratamos aquí.

Este análisis es importante no por la tipología de los discursos o la identificación de la retórica modernista y los mitos hegemónicos de la naturaleza y la sociedad que los sustentan. Más bien, hemos tratado de demostrar que la adopción del lenguaje y la retórica de la gestión medioambiental global limita las soluciones propuestas para estas cuestiones. Estas soluciones tecnocráticas no reflejan por necesidad las realidades ecológicas de la utilización humana del ambiente. De este modo, el análisis del discurso puede contribuir a una ecología política sensible a la construcción y el uso políticos del conocimiento científico y a la naturaleza multinivel de las interacciones entre las instituciones y el cambio ambiental.

Agradecimientos

Los autores han contribuido por igual al artículo y se enumeran por orden alfabético: no se asigna antigüedad en la autoría. Agradecemos al Consejo de Investigación de Noruega y al Consejo Británico la financiación de esta

investigación. También damos las gracias a Jon Barnett, del MacMillan Brown Centre for Pacific Studies, University of Canterbury, al Dr. Strangelove, Andrew Jordan y colegas de Norwich, A˚ s y Oslo, y a dos revisores anónimos de esta revista, por sus constructivos comentarios. Neil Adger y Hatrina Brown agradecen a sus colegas del Departamento de Geografía de Canterbury, Nueva Zelanda, por su apoyo durante la redacción del artículo. La versión final sigue siendo responsabilidad nuestra.

Referencias[17]

Adger, W. N. (1999). Social vulnerability to climate change and extremes in coastal Vietnam. *World Development*, *27*(2), 249-269.

Adger, W. N. (2001). Scales of governance and environmental justice for adaptation and mitigation of climate change. *Journal of International Development*, *13*(5), 921–931.

Adger, W. N. y K. Brown. (1994). *Land use and the causes of global warming*. Wiley.

Agarwal, A. y S. Narain. (1991). *Global warming in an unequal world: a case of environmental colonialism*. Centre for Science and Environment.

Allen, J. y D. Barnes. (1985). The causes of deforestation in developing countries. *Annals of the Association of American Geographers*, *75*(2), 163-184.

Angelsen, A. y D. Kaimowitz. (1999). Rethinking the causes of deforestation: lessons from economic models. *World Bank Research Observer*, *14*(1), 73-98.

Aubreville, A. (1949). *Climats, forêts et désertification de l'Afrique tropicale*. Société d'Editions Géographiques, Maritimes et Coloniales.

17 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Baker, J. T., Borris, R. P., Carte, B. K., Cordell, G. A., Soejarto, D. D., Cragg, G. M., Gupta, M. P., … & Reinhold, D. (1995). Natural product drug discovery and development: new perspectives on international collaboration. *Journal of Natural Products Lloydia*, *58*(9), 1325-1357.

Banco Mundial. (1999). *World development report 1999*.

Banco Mundial. (1996). *Towards environmentally sustainable development in Sub-Saharan Africa. A World Bank agenda*.

Barnett, J. (2000). Destabilising the environment-conflict thesis. *Review of International Studies*, *26*(2), 271-288.

Barnett, J. (2001). *The meaning of environmental security: ecological politics and policy in the environmental security era*. Zed Books.

Bawa, K. S. y S. Dayanandan. (1997). Socioeconomic factors and tropical deforestation. *Nature*, *386*(6625), 562-563.

Beckerman, W. (1995). *Small is stupid: or blowing the whistle on the greens*. Duckworth.

Behnke, R. H. e I. Scoones. (1993). Rethinking range ecology: implications for rangeland management in Africa. En R. H. Behnke, I. Scoones y C. Kerven Range (coords.). *Ecology at disequilibrium: new models of natural variability and pastoral adaptation in African savannas* (1-30). Overseas Development Institute / IITED.

Benjaminsen, T. A. (1993). Fuelwood and desertification: Sahel orthodoxies discussed on the basis of field data from the Gourma region in Mali. *Geoforum*, *24*(4), 397-409.

Benjaminsen, T. A. (1996). Bois-énergie, déboisement et sécheresse au Sahel: le cas du Gourma Malien. *Sécheresse*, *7*(3), 179-185.

Benjaminsen, T. A. (1997a). Is there a fuelwood crisis in rural Mali? *Geo. Journal*, *43*(2), 163-174.

Benjaminsen, T. A. (1997b). Natural resource management, paradigm shifts and the decentralisation reform in Mali. *Human Ecology*, *25*(1), 121-143.

Benjaminsen, T. A. (2000). Conservation in the Sahel: people and policies in Mali (1900-1998). En R. Schroeder y V. Broch-Due (eds.). *Producing nature and poverty in Africa* (94-108). Nordic Africa Institute.

Benjaminsen, T. A. (2001a). The Malian cotton zone: economic success but environmental failure? En T. A. Benjaminsen y C. Lund (eds.). *Politics, property and production in the West African Sahel: understanding natural resources management*. Nordic Africa Institute (en prensa).

Benjaminsen, T. A. (2001b). The population-agriculture-environment nexus in the Malian cotton zone. *Global Environmental Change*, *11*(4). (en prensa).

Berger, A. A. (1997). Narratives in popular culture, media, and everyday life. Sage.

Best, J. (1989). *Images of issues: typifying contemporary social problems*. Aldine de Gruyter.

Bilsborrow, R. E. y M. Georges. (1994). Population, land use and the environment in developing countries: what can we learn from cross-national data? En K. Brown y D. W. Pearce (eds.). *The causes of tropical deforestation* (106-133), UCL Press.

Blaikie, P. y H. Brookfield. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.

Bovill, E. W. (1921). The encroachment of the Sahara on the Sudan. *Journal of the African Society*, *20*, 174-85, 259-69.

Bromley D. W. (1998). Deforestation: institutional causes and solutions. En M. Palo y J. Uusivuori (eds.). *World forests, society and environment* (95-101). Kluwer.

Brosius, J. P. (1999). Anthropological engagements with environmentalism. *Current Anthropology*, *40*(3), 277-309.

Brown, K. y W. N. Adger. (1994). Economic and political feasibility of international carbon offsets. *Forest Ecology and Management*, *68*(2), 217-229.

Brown, K. y F. Ekoko. (2001). Forest encounters: synergy among agents of forest change in Southern Cameroon. *Society and Natural Resources*, *14*(4), 269-290.

Brown, K. y S. Lapuyade. (2001). A livelihood from the forest: gendered visions of social, economic and environmental change in Southern Cameroon. *Journal of International Development*, (en prensa).

Brown, K. y M. Muchagata. (1999). *Sustainability of forest frontier farming at the forest fringe*. School of Development Studies, University of East Anglia.

Brown, K. y D. W. Pearce (eds.). (1994). *The causes of tropical deforestation*. UCL Press.

Brown, K. y S. Rosendo. (2000). Environmentalists, rubber tappers and empowerment: the politics and economics of extractive reserves. *Development and Change*, *31*(1), 201-27.

Bryant, D., D. Nielsen y L. Tangley. (1997). *The last frontier forests: ecosystems and economies on the edge.* World Resources Institute.

Bryant, R. L. y S. Bailey. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.

Burroughs, W. J. (1997). *Does the weather really matter? The social implications of climate change*. Cambridge University Press.

Carr, S. y R. Mpande. (1996). Does the definition of the issue matter? NGO influence and the International Convention to Combat Desertification in Africa. *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, *34*(1), 143-166.

Chichilinsky, G. y G. Heal. (1998). Economic returns from the biosphere. *Nature*, *391*(6668), 629-630.

Cline, W. R. (1992). *The economics of global warming*. Institute for International Economics.

Colchester, M. y L. Lohmann (eds.). (1993). *The struggle for land and the fate of the forests*. Zed Books.

Conklin, B. A. y L. R. Graham. (1995). The shifting middle ground: Amazonian Indians and ecopolitics. *American Anthropologist*, *97*, 695-710.

Dioné, J. 1989. *Informing food security policy in Mali: interactions between technology, institutions and market reforms* [tesis de doctorado, Massachusetts State University].

Dryzek, J. S. (1997). *The politics of the Earth: environmental discourses*. Oxford University Press.

Eisner, T. (1989). Prospecting for nature's chemical riches. *Issues in Science and Technology*, *6*(2), 31-34.

Eisner, T. (1991). Chemical prospecting: a proposal for action. En F. Bormann y R. Kellert (eds.). *Ecology, economics, and ethics: the broken circle* (196-202). Yale University Press.

Elliot, L. 1999. The global politics of the environment [ponencia en *The New Agenda for International Relations: Ten Years After the Wall*, University of East Anglia, Norwich, 9-10 de septiembre].

Fairhead, J. y M. Leach. (1998). *Reframing deforestation. Global analyses and local realities: studies in West Africa*. Routledge.

Fankhauser, S. 1995. *Valuing climate change: the economics of the greenhouse*. Earthscan.

Ferguson, J. (1990). *The anti-politics machine: "development", depolitisation and bureaucratic power in Lesotho*. Cambridge University Press.

Foucault, M. (1979). *Discipline and punish: the birth of the prison*. Penguin.

Foucault, M. (1984). *The history of sexuality*. Penguin.

Foucault, M. (1991). Politics and the study of discourse. En G. Burchell *et al.* (eds.). *The Foucault effect: studies in governmentality* (53-72). Harvester Wheatsheaf.

Goldman, M. (1998). The political resurgence of the commons. En M. Goldman (ed.). *Privatising nature: political struggles for the global commons* (1-19). Rutgers University Press.

Grillo, R. y J. Stirratt. (1997). *Discourses of development: anthropological perspectives*. Berg.

Hajer, M. A. (1995). *The politics of environmental discourse: ecological modernization and the policy process*. Clarendon.

Hannigan, J. A. (1995). *Environmental sociology*. Routledge.

Hartmann, B. (1998). Population, environment and security: a new trinity. *Environment and Urbanization*, *10*(2), 113-127.

Hayes, P. y K. Smith (eds.). (1993). *The global greenhouse regime: who pays?* Earthscan.

Helldén, U. (1991). Desertification: time for an assessment? *Ambio*, *20*(8), 372-383.

Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental scarcities and violent conflict. *International Security*, *19*(1), 5-40.

IUCN / UNEP / WWF. (1991). *Caring for the Earth*.

Jassannoff, S. y B. Wynne. (1998). Science and decision-making. En S. Rayner y E. Malone (eds.). *Human choice and climate change. Vol. 1. The societal framework* (1-87). Batelle Press.

Jeanrenaud, S. (1998). *Can the leopard change its spots? Exploring people-centred conservation in WWF* [tesis de doctorado, School of Development Studies, University of East Anglia].

Kaoneka, A. R. S. (1998). African forests, societies and environments. En M. Palo y J. Uusivuori (eds.). *World forests, society and environment* (139-145). Kluwer.

ten Kate, K. (1995). *Biopiracy or green petroleum? Expectations and best practice in bio-prospecting*. Overseas Development Administration.

Kaul, L, I. Grunberg y M. A. Stern. (1999). *Global public goods: international co-operation in the 21st century*. Oxford University Press.

Keeley, J. e I. Scoones (2000). Knowledge, power and politics: the environmental policy-making process in Ethiopia. *Journal of Modern African Studies*, *38*(1), 89-120.

Kloppenburg, J., Jr., y S. Rodriquez. (1992). Conservationist or corsairs? *Seedling*, *9*(2-3), 12-17.

Lamprey, H. (1975). Report on the desert encroachment reconnaissance in Northern Sudan: 21 October to 10 November, 1975. *Desertification Control Bulletin*, *11*(17), 1-7.

Lappé, F., M. J. Collins y P. Rosset. (1998). *World hunger: twelve myths*. Earthscan.

Leach, M. y R. Mearns (eds.). (1996) *The lie of the land: challenging received wisdom on the African environment*. James Currey.

Litfin, K. T. (1994) *Ozone discourses: science and politics in global environmental cooperation*. Columbia University Press.

Lomborg, B. (1998). *Verdens sande Tilstand*. Centrum.

Mabbutt, J. A. (1984). A new global assessment of the status and trends of desertification. *Environmental Conservation*, *11*(2), 103-113.

Manne, A. y R. Richels. (1992). *Buying greenhouse insurance*. MIT Press.

Marglin, F. A. y S. A. Marglin (eds.). (1990). *Dominating knowledge: development, culture, and resistance*. Clarendon.

Mateo, N. (2000). Bioprospecting and conservation in Costa Rica. En H. Svarstad y S. Dillion (eds.). *Responding to bioprospecting: from biodiversity in the South to medicines in the North* (45-55). Spartacus.

Mooney, P. (2000). Why we call it biopiracy. En H. Svarstad y S. Dillion (eds.). *Responding to bioprospecting: from biodiversity in the South to medicines in the North* (pp. 37-44). Spartacus.

Moran, K. (1997). Returning benefits from ethnobotanical drug discovery to native communities. En F. Grifo y J. Rosenthal (eds.). *Biodiversity and human health* (243-267). Island Press.

Mortimore, M. (1989). *Adapting to drought: farmers, famines and desertification in West Africa*. Cambridge University Press.

Mortimore, M. (1998). *Roots in the African dust: sustaining the drylands*. Cambridge University Press.

Mugabe, J., C. V. Barber, G. Henne, L. Glowka y A. La Viña. (1997). Managing access to genetic resources. En J. Mugabe *et al.* (eds.). *Access to genetic resources: strategies for sharing benefits* (5-32). ACTS Press.

Myers, N. (1979). *The sinking ark: a new look at the problem of disappearing species*. Norton.

Myers, N. (1984). *The primary source: tropical forests and our future*. Norton.

Myers, N. (1994). Tropical deforestation: rates and patterns. En K. Brown y D. W. Pearce (eds.). *The causes of tropical deforestation* (7-40). UCL Press.

Naciones Unidas. (1992). *Convention on biological diversity*. United Nations Environmental Programme.

Newell, P. (2000). *Climate for change: non-state actors and the global politics of the greenhouse*. Cambridge University Press.

Oba, G., N. Chr. Stenseth y W. Lusigi. (2000). New perspectives on sustainable grazing management in arid zones of Sub-Saharan Africa. *Bio Science*, *50*(1), 35-51.

O'Riordan, T. (1983). *Environmentalism* (segunda edición). Pion.

O'Riordan, T. y J. Jäger (eds.). (1996). *Politics of climate change: a European perspective*. Routledge.

Palo, M. (1994). Population and deforestation. En K. Brown y D. W. Pearce (eds.). *The causes of tropical deforestation* (42-56). UCL Press.

Parry, M., N. Arnell, M. Hulme, R. Nicholls y M. Livermore. (1998). Adapting to the inevitable. *Nature*, *395*(6704), 741.

Pearce, D. W. (1995). New directions for financing global environmental change. *Global Environmental Change*, *5*(1), 27-40.

Peet, R. y M. Watts (1996). Liberation ecology: development, sustainability, and environment in an age of market triumphalism. En R. Peet y M. Watts (eds.). *Liberation ecologies. Environment, development, social movements* (1-45). Routledge.

Petersen, L. K. (1997). *Miljobevidsthed pa MTV. Om naturen i massekulturen*. Forlaget Sociologi.

Porter, G. y J. W. Brown. (1996). *Global environmental polities*. Westview.

RAFI (Rural Advancement Foundation International). (1994). *Conserving indigenous knowledge: integrating two systems of innovation*. United Nations Development Programme.

RAFI. (1995). *Biopiracy update: a global pandemic* [comunicado, septiembre-octubre].

RAFI / Cultural Survival Canada. (1997). Sangre de drago. *BioPirates*, log 4.

Raymond, G. y M. Fok. (1995). Relations entre coton et vivriers en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le coton affame les populations: une fausse affirmation? *Economies et Sociétés. Série Développement Agro-alimentaire*, *22*(3-4), 221-34.

Reid, W. V., Laird, S. A., Meyer, C. A., Gamez, R., Sittenfeld, A., Janzen, D. H., … & Thalji, N. (1993). *Biodiversity prospecting: using genetic resources for sustainable development*. World Resources Institute.

République du Mali. (1985). Plan National de litte Contre la Désertification et de l'Avancée du Désert, 1985-2000. Direction Nationale des Eaux et Forêts.

Reyes, V. (1996). The value of sangre de drago. *Seedling*, *13*(1), 16-21.

Ribot, J. (1995). *Review of policies in the traditional energy sector: Mali forestry sector policy report*. Africa Technical Division / World Bank.

Ribot, J. (1999). Decentralisation, participation and accountability in Sahelian forestry: legal instruments of political-administrative control. *Africa*, *69*(1), 23-64.

Rich, B. (1994). *Mortgaging the Earth*. Earthscan.

Robbins, P. (2000). The practical politics of knowing: state environmental knowledge and local political economy. *Economic Geography*, *76*, 126-44.

Roe, E. M. (1991). Development narratives, or making the best of blueprint development. *World Development*, *19*(4), 287-300.

Roe, E. M. (1995). Except-Africa: postscript to a special section on development narratives. *World Development*, *23*(6). 1065-1069.

Roe, E. M. (1999). *Except-Africa. Remaking development, rethinking power.* Transaction Publishers.

Rowlands, I. H. (1995). *The politics of global atmospheric change*. Manchester University Press.

Sandler, T. (1997). *Global challenges: an approach to environmental, political and economic problems*. Cambridge University Press.

Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state*. Yale University Press.

Shackley, S. y B. Wynne (1995). Global climate change: the mutual construction of an emergent science-policy domain. *Science and Public Policy*, *22*(4), 218-230.

Shaw Thacher, P. (1979). Desertification: the greatest single environmental threat. *Desertification Control Bulletin*, *2*(1), 7-9.

Shiva, V. (1997). *Biopiracy: the plunder of nature and knowledge*. South End Press.

Stebbing, E. P. (1938). The encroaching Sahara: the threat to the West African colonies. *The Geographical Journal*, *85*, 506-524.

Stott, P. (1999. *Tropical rain forest: a political ecology of hegemonic mythmaking*. Institute of Economic Affairs.

Stott, P. y S. Sullivan (eds.). (2000) *Political ecology: science, myth and power*. Arnold.

Svarstad, H. (En prensa). Bioprospecting: global discourses and local perceptions. Shaman pharmaceuticals in Tanzania. Centre for Development and the Environment, University of Oslo.

Svarstad, H. (2000). Local interests and foreign interventions: shaman Pharmaceuticals in Tanzania. En H. Svarstad y S. Dillion (eds.). *Responding to bioprospecting: from biodiversity in the South to medicines in the North* (145-153). Spartacus.

Swift, J. (1996). Desertification: narratives, winners and losers. En M. Leach y R. Mearns (eds.). *The lie of the land: challenging received wisdom on the African environment* (73-90). James Currey.

Taylor, P. y F. Buttel. (1992). How do we know we have global environmental problems? Science and the globalization of environmental discourse. *Geoforum*, *23*(3), 405-16.

Thompson, M. y S. Rayner. (1998). Cultural discourse. En S. Rayner y E. Malone (coords.). *Human choice and climate change. Volume 1. The societal framework* (265-343). Batelle Press.

Turner, M. D. (1999). Conflict, environmental change and social institutions in dryland Africa: limitations of the community resource management approach. *Society and Natural Resources*, *12*(7), 643-657.

Warren, A. y M. Khogali. (1992). *Assessment of desertification and drought in the Sudano Sahelian eegion 1985-1991.* UNSO.

Wigley, T. M. L., R. Richels y J. A. Edmonds. (1996). Economic and environmental choices in the stabilization of atmospheric CO2 concentrations. *Nature*, *379*(6562), 240-243.

Wilson, E. O. 1992. *The diversity of life*. Penguin.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future.* Oxford University Press.

Yapa, L. (1996). What causes poverty? A postmodern view. *Annals of the Association of American Geographers*, *86*(4), 707-728.

SECCIÓN D. CUESTIONES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS. GRANDES DEBATES

22. La nueva ecología y las ciencias sociales: ¿Qué horizontes hay para una artículación fructífero?[1]

Ian Scoones

Resumen: Esta revisión plantea la pregunta: ¿qué nuevas vías de investigación en ciencias sociales sugiere el nuevo pensamiento ecológico, centrado en la dinámica de desequilibrio, la variación espacial y temporal, la complejidad y la incertidumbre? Tras repasar el surgimiento de la "nueva ecología" y destacar los contrastes con las anteriores perspectivas de "equilibrio de la naturaleza", se examinan las obras procedentes de la antropología ecológica, la ecología política, la economía ambiental y ecológica; y los debates sobre naturaleza y cultura. Con algunas excepciones importantes, gran parte de los trabajos de las ciencias sociales y los debates populares y políticos asociados siguen firmemente aferrados a una visión estática y de equilibrio. Esta revisión se centra en tres ámbitos en los que ha surgido una perspectiva más dinámica. Cada uno de ellos tiene el potencial de tomar en serio elementos centrales del nuevo pensamiento ecológico, a veces con importantes consecuencias prácticas para la planificación, la intervención, el diseño y la gestión. El primero es la preocupación por la dinámica espacial y temporal desarrollada en análisis detallados y situados de "personas en lugares", utilizando, en particular, el análisis histórico como una forma de explicar el cambio ambiental a través del tiempo y el espacio. En segundo lugar, la creciente comprensión del ambiente como producto y escenario de las interacciones humanas, que vincula los análisis estructurales dinámicos de los procesos ambientales con la apreciación de la intervención humana en la transformación del medio, como parte de un enfoque de "estructuración". En tercer lugar, la apreciación de la complejidad y la incertidumbre de los sistemas socioe-

1 Publicado originalmente en: Ian Scoones, 1999, "New ecology and the social sciences: what prospects for a fruitful engagement?", *Annual Review of Anthropology*, *28*, 479-507.

cológicos, y con ello, el reconocimiento de que la predicción, la gestión y el control son improbables, si no imposibles.

Palabras clave: ecología de no equilibrio, cambio ambiental, ciencia social ambiental.

Introducción

En la última década se ha producido una explosión de interés por las ciencias sociales del ambiente. Esta revisión se pregunta qué vínculos se están forjando entre las ciencias naturales y las sociales en este nuevo ámbito, qué terreno común conceptual y metodológico se está encontrando y cuáles son las perspectivas y los retos de los nuevos tipos de interacción interdisciplinaria. Se centra, en particular, en la aparición de lo que se ha dado en llamar la nueva ecología (Zimmerer, 1994; véanse también McInTosh, 1985; 1987; Bramwell, 1989; Worster, 1977; Botkin, 1990) y en las implicaciones que tiene este pensamiento tiene la forma en que entendemos las relaciones entre los procesos sociales, económicos y ecológicos. En el pasado, los debates de las ciencias sociales han adoptado a menudo una visión estática y equilibrada de los sistemas ecológicos, basada en supuestos sobre el equilibrio de la naturaleza. Esto ha dado lugar a un planteamiento de los problemas que ha tendido a ignorar las cuestiones de dinámica y variabilidad a lo largo del tiempo y el espacio, a menudo excluyendo del análisis los temas clave de la incertidumbre, la dinámica y la historia. Esta visión selectiva de las cuestiones ecológicas se traduce en un análisis parcial y limitado. Esto, a su vez, puede dar lugar a la exclusión de ciertas perspectivas sobre las interacciones ecológico-sociales que podrían derivarse de lecturas alternativas de la teoría ecológica y social, lo cual tiene implicaciones tanto prácticas como políticas, ya que determinados puntos de vista sobre las interacciones entre las personas y el ambiente se convierten en dominantes en el discurso político hegemónico, mientras que otros permanecen sin ser escuchados. Una mayor atención a los debates en torno a la nueva ecología y una exploración de sus implicaciones sociales conduce potencialmente a una postura más pluralista sobre las cuestiones ambientales, una postura en la que pueden contribuir diversas perspectivas, más allá de la visión limitadora del equilibrio de la naturaleza.

La primera parte de este capítulo repasa la aparición de la nueva ecología, trazando una historia esquemática de conceptos e ideas clave. A continuación, se relacionan con los debates en el seno de las ciencias sociales. En los debates subsumidos bajo una amplia variedad de etiquetas —antropología ecológica, ecología humana, etnoecología, economía ambiental y ecológica, ecología política, etc.—, encontramos una visión limitada de la dinámica ecológica, con debates que siguen firmemente aferrados a una perspectiva de equilibrio. Hace casi veinte años, Orlove (1980) reflexionaba sobre una falta de articulación similar entre las ciencias naturales y las sociales. Sin embargo, desde entonces se han producido una serie de avances que ofrecen un mayor potencial de articulación. La preocupación por la historia, la variabilidad, la complejidad y la incertidumbre ha surgido tanto en la nueva ecología como en determinadas vertientes de las ciencias sociales dedicadas al ambiente, sobre las que se reflexiona en las secciones siguientes. Por último, la conclusión destaca los principales retos conceptuales, metodológicos y políticos que perfila esta articulación.

Esta revisión es necesariamente selectiva. Existe una gran cantidad de bibliografía sobre estas cuestiones en diversas disciplinas, y aquí solo puede incluirse una pequeña parte. Al explorar los temas de esta revisión, he intentado mirar más allá de la antropología, hacia los debates en otras disciplinas: ecología, geografía, sociología, estudios científicos y otras. Es evidente la existencia de una importante convergencia de debates, que podría ofrecer la perspectiva de una nueva colaboración interdisciplinar.

El desequilibrio de la naturaleza: La aparición de una nueva ecología

Las nociones de equilibrio en la naturaleza tienen una larga tradición en el pensamiento occidental, que se remonta a las ideas griegas, cristianas, medievales y racionalistas del siglo XVIII (Worster, 1993a). La ecología, término acuñado por primera vez por Haekel en 1886 (Goodland, 1975), se inspiraba en esos conceptos para explicar la estructura y el funcionamiento del mundo natural. En 1864, Marsh (1965: 12) afirmaba que "la naturaleza, si no se la perturba, moldea su territorio de tal forma que le

otorga una permanencia de forma, delineado y proporción que casi no cambia, excepto cuando es destrozada por convulsiones geológicas; y en estos casos comparativamente raros de trastorno, se dispone de inmediato a reparar el daño superficial y a restaurar, en la medida de lo posible, el aspecto anterior de su dominio". Como se explica más adelante, este largo linaje del pensamiento del equilibrio puede rastrearse hasta el presente, en gran parte del pensamiento ecologista popular, así como en corrientes más académicas del pensamiento de las ciencias sociales. Sin embargo, el debate en ecología que cuestiona este punto de vista también se ha extendido durante los últimos setenta años. En su famoso libro de texto de 1930, Elton señalaba que "el equilibrio de la naturaleza no existe y quizá nunca ha existido" (Elton, 1930: 15). Cincuenta años después, Connell y Sousa (1983: 789) llegaron a una conclusión similar: "Si existe un equilibrio de la naturaleza, ha resultado extremadamente difícil de demostrar". Sin embargo, a pesar de estos comentarios, durante gran parte de este siglo la ciencia de la ecología se ha basado en nociones de equilibrio que presuponen la *estasis*, la regulación homeostática y puntos o ciclos de equilibrio estables.

La ciencia ha estado dominada por una serie de áreas de investigación ecológica (para revisiones históricas detalladas, véanse Bramwell, 1989; McIntosh, 1987; Worster, 1977). Desde principios de siglo, con los trabajos de Clements (1916), los ecólogos de la vegetación se han interesado por los procesos de "sucesión", explorando cómo los conjuntos de vegetación cambian hacia un "clímax", donde las comunidades clímax a veces se consideran como "superorganismos". A partir de la década de los treinta, sobre todo a raíz de los trabajos clásicos de Lotka y Volterra, otro tema se ha centrado en la dinámica de poblaciones, y en particular en la regulación de las poblaciones animales mediante la limitación de su número de individuos en función de la densidad. Inspirados en la obra de Malthus, estos planteamientos se han basado a menudo en modelos simples de crecimiento de la población, que describen las características supuestamente estables de la tasa de crecimiento intrínseca y la capacidad de carga. En la década de los cincuenta, los conceptos sistémicos constituyeron la base de las ideas ecosistémicas, en las que se definían sistemas cerrados, regulados y homeostáticos (Odum,

1953). Los conceptos ecosistémicos identificaban redes tróficas complejas, pero bien integradas, y flujos de nutrientes y energía regulados y estables. Por último, la biología de la conservación, basada en los principios de la biogeografía insular (MacArthur y Wilson, 1967), representa otro ámbito de la teoría ecológica en el que han predominado los supuestos de equilibrio, en este caso de una relación estable entre diversidad de especies y superficie.

Cada una de estas áreas centrales de la teoría ecológica tiene características de equilibrio en el núcleo de sus modelos y como elemento fundamental de sus supuestos, y, como es lógico, de sus conclusiones y recomendaciones de gestión aplicadas. Así, la teoría de la sucesión, que hacía hincapié en el clímax estable, se convirtió en la guía para la gestión de pastizales o bosques; los modelos de población identificaban las capacidades de carga y los niveles de rendimiento máximo sostenido para su uso en la gestión de poblaciones animales; la teoría de los ecosistemas se centraba en la regulación de los flujos del sistema y, por tanto, en cómo se evaluaban las cargas contaminantes u otros impactos, y la biología de la conservación proporcionaba una base sobre la cual crear políticas de biodiversidad y diseñar áreas protegidas.

Aunque hubo disputas dentro de cada uno de estos ámbitos de la teoría, apenas se abandonó el pensamiento del equilibrio hasta la década de los setenta, cuando se produjo una explosión de interés por la ecología matemática y las propiedades de (in)estabilidad de los sistemas tanto modelo como reales (May, 1977; 1986; Pimm, 1991). En las décadas siguientes, surgieron los conceptos clave de la teoría del no equilibrio. Estos conceptos se basaban en las propiedades de los sistemas no lineales, en especial los dominados por altos niveles de variabilidad temporal y espacial (De Angelis y Waterhouse, 1987). Tres conceptos aportaron hipótesis e interrogantes importantes: el concepto de estados estables múltiples —sistemas no lineales con más de un atractor de equilibrio (Noy-Meir, 1973)—; el reconocimiento de la dinámica caótica, en la que las interacciones no lineales son sensibles a las condiciones iniciales y carecen de predictibilidad a largo plazo (May, 1989, Hastings *et al*., 1993; Elner y Turchin, 1995), y los sistemas dominados escolásticamente, que en realidad son no equilibrados, sin mecanismos simples de retroalimentación reguladora (Chesson y Case, 1986).

Surgió todo un lenguaje nuevo para describir diversos elementos de las propiedades de tales sistemas. Términos como *variabilidad*, *resiliencia*, *persistencia*, *resistencia*, *sensibilidad* y *sorpresa* captaban todos ellos algún elemento de esa dinámica compleja (Harrison, 1979). Más tarde, algunos de estos términos se han generalizado y han servido de base a debates más amplios sobre la sostenibilidad y la gestión adaptativa (Holling, 1973; 1986; Conway, 1987). Aunque esta explosión de interés por las ideas de no equilibrio produjo cierto nivel de confusión y una multitud de artículos a menudo llenos de arcaica matemática, provocó una nueva ola de investigación empírica, centrada en la complejidad de los ecosistemas, la variabilidad en el tiempo y el espacio, así como en las implicaciones del cambio dinámico sin equilibrio. Los ejemplos de una amplia gama de campos de investigación ecológica han empezado a cuestionar las nociones de equilibrio que enmarcaban el debate tanto en la ecología pura como en la aplicada. Entre ellos figuran los bosques (Sprugel, 1991; Dublin *et al*., 1990), los pastizales (Noy-Meir, 1973; Westoby *et al*., 1989: Walker, 1993; Behnke y Scoones, 1993; Ellis y Swift, 1988), la gestión de plagas (Holling, 1978; 1986), los recursos marinos (Larkin, 1977; Wilson *et al*., 1990; Acheson y Wilson, 1998; Hilborn y Gunderson, 1996), los arrecifes de coral (Knowlton, 1992; Hughes, 1994) y la conservación de la biodiversidad (Holling *et al*., 1995).

Entonces ¿qué aspecto tiene la nueva ecología? Destacan tres temas, cada uno de los cuales tiene importantes resonancias potenciales, aunque a menudo no apreciadas, con debates paralelos en las ciencias sociales. En primer lugar, la comprensión de la variabilidad en el espacio y el tiempo ha dado lugar a trabajos que han llevado el debate sobre la dinámica de poblaciones más allá de las simples suposiciones de una regulación equilibrada, hacia una apreciación más amplia de la dinámica compleja, la incertidumbre y la sorpresa (Wiens, 1976; Pickett y White, 1985; Holling, 1986; 1994). En segundo lugar, la exploración de la escala en los procesos dinámicos ha dado lugar a trabajos sobre las interacciones no lineales por medio de jerarquías en el análisis de sistemas, y a una comprensión más amplia de los patrones espaciales de los procesos ecológicos, desde los parches a pequeña escala hasta los paisajes más amplios (Allen y Starr, 1982; Turner, 1989). En tercer lugar, el reconocimiento de la importancia de la dinámica temporal en los

patrones y procesos actuales ha dado lugar a un amplio conjunto de nuevos trabajos en paleoecología, ecología evolutiva e historia ambiental. Estos temas han arrojado nueva luz sobre algunos problemas ecológicos perennes. Por ejemplo, nuevas perspectivas de la ecología de los pastizales han cuestionado las nociones estáticas de capacidad de carga y vegetación clímax como base de la gestión. Los planteamientos más dinámicos que han ocupado su lugar son los modelos de estado y transición del cambio de vegetación, la gestión de recursos clave o puntos focales de tipos de pastizales espacialmente diversos y la movilidad del ganado como parte de estrategias de pastoreo oportunistas (Scoones, 1995). Del mismo modo, en ecología forestal, el creciente énfasis en los regímenes de perturbación y la dinámica de los parches en los mosaicos forestales sugiere estrategias alternativas de manejo forestal que aceptan la variabilidad en el tiempo y el espacio (Sprugel, 1991). El reconocimiento de dinámicas de no equilibrio en una variedad de entornos (aunque no en todos) pone en tela de juicio algunas concepciones básicas, a menudo profundamente instauradas, de la naturalidad, el equilibrio y el orden, y sugiere nuevas formas de pensar sobre la gestión y la política de recursos que a menudo eran rechazadas por las perspectivas ecológicas más convencionales.

Articulaciones con las ciencias sociales

¿Cómo han intentado las ciencias sociales articularse con el pensamiento ecológico en las últimas décadas? Con demasiada frecuencia, los análisis de las ciencias sociales, ya sea en antropología, sociología, geografía o economía, han permanecido apegados a una visión estática y equilibrista de la ecología, a pesar de los desafíos concretados a dicha visión dentro de la ecología durante muchos años. Las distintas disciplinas han adoptado diferentes perspectivas a lo largo del tiempo. Tanto si se basan en las tradiciones intelectuales del funcionalismo estructural y el funcionalismo de la antropología y la sociología de las décadas de los cincuenta y sesenta, como en el estructuralismo del pensamiento económico político marxista, en los análisis holísticos de los analistas de sistemas de las ramas de la geografía o en el individualismo racional de actor de la economía neoclásica, los marcos de las ideas del ambiente como holístico, integra-

do y regulado, y del cambio ambiental como lineal, estable y predecible, han sido sorprendentemente similares. El equilibrio de la naturaleza ha tenido una larga vida útil en las ciencias sociales, reforzado por modelos funcionalistas dependientes de nociones estables y equilibradas del orden social. En los siguientes apartados se analizan una serie de campos de investigación de las ciencias sociales que se traslapan entre sí, antes de pasar a la cuestión de por qué han persistido tanto esas visiones del equilibrio de la naturaleza.

Antropología ecológica

En la antropología, por ejemplo, el interés por las cuestiones ecológicas se vio estimulado en los campos de la antropología ecológica, la ecología cultural y la ecología humana en torno a cuestiones sobre cómo las sociedades (principalmente) no occidentales conviven con la naturaleza (Vayda y McCay, 1975; Orlove, 1980; Butzer, 1989; Moran, 1990; Zimmerer, 1996a). A partir de la década de los cincuenta surgió un importante corpus de trabajos, como la ecología cultural (Steward, 1955), el enfoque ecosistémico (Rappaport, 1967) y el materialismo cultural (Harris, 1979). La mayor parte de ellos sostenían que, al igual que los entornos naturales están regulados homeostáticamente, también lo están las sociedades que dependen de la naturaleza. Así, Conklin sobre Filipinas (1954), Sahlins sobre Fiji (1957), Lee sobre los *!kung* (1972), Geertz sobre Indonesia (1963) y Rappaport sobre Nueva Guinea (1967), entre muchos otros, defendían la estrecha interacción de los sistemas naturales y sociales como un todo funcional.

El enfoque sistémico, y en particular la atención prestada a los flujos de energía (Rappaport, 1971), estaba estrechamente vinculado a los conceptos de ecosistema vigentes en la ecología de la época (Odum, 1953). Se consideró una forma de vincular las ciencias sociales y naturales (Brookfield, 1964; Stoddart, 1965). Sin embargo, el de Vayda y McCay (1975) fue uno de los primeros intentos de desviar la atención de la antropología ecológica de un programa de investigación basado en el equilibrio, el ecosistema y la sociedad, hacia las respuestas individuales a los peligros, siguiendo

un influyente corpus de trabajo en geografía (Kates, 1971; Burton *et al*., 1978; véase Watts, 1983).

Aunque las versiones circulares extremas de una postura funcionalista en ecología cultural han sido rechazadas desde hace tiempo, han persistido elementos en perspectivas vinculadas a conceptos de adaptación evolutiva (Diener *et al*., 1980). Algunos de los primeros trabajos en esta línea se basaban en ideas seleccionistas de grupo desacreditadas hace tiempo, aunque los más recientes adoptan una postura más individualista, basándose en los conceptos del actor racional y la selección natural para describir pautas de comportamiento humano en relación con los recursos ambientales, un enfoque que Orlove (1980) denomina enfoque procesual en antropología ecológica. Este trabajo tiene ecos en los enfoques evolutivos darwinistas, en el análisis transaccional (Barth, 1966) y, más recientemente, en los enfoques basados en el actor (Vayda, 1983). Una vertiente importante siguió el influyente trabajo de Boserup (1965) y ha estudiado las interacciones de la demografía, la estructura de los hogares y el cambio tecnológico (Bennett, 1976; 1993; Lees y Bates, 1990; Hardesty, 1986). Mientras tanto, otros se concentraron en los modelos de toma de decisiones del comportamiento individual, impulsados en gran parte por el creciente interés por la sociobiología (Dyson-Hudson y Smith, 1978).

A menudo, en paralelo a estos trabajos, otros estudios han puesto de relieve la estrecha relación entre los conocimientos y la práctica indígenas en una amplia gama de entornos ambientales. Es muy amplia la bibliografía sobre etnoecología y los llamados conocimientos técnicos indígenas (Warren *et al*., 1995). Sin embargo, con algunas excepciones importantes (Richards, 1985; Denevan, 1983; Sillitoe, 1998), gran parte de estos trabajos no se plantean las complejidades de las dinámicas ecológicas y sociales, y mantienen una visión estática tanto del ambiente como del conocimiento. La consecuencia ha sido la recopilación de muchos datos de forma clásica, en forma de listas y clasificaciones que siguen estando mal situadas en las complejidades de los procesos ambientales y sociales.

Ecología política

Diversos estudiosos han considerado que las cuestiones fundamentalmente políticas de las relaciones estructurales de poder y dominación sobre los recursos ambientales son clave para comprender las relaciones de los procesos sociales, políticos y ambientales (Blaikie y Brookfield, 1987; Bryant, 1992; Bryant y Bailey, 1997; Greenberg y Park, 1994). En los primeros trabajos en este campo, el ambiente se consideraba una característica estructural adicional del análisis, a menudo descrito como fijo o sujeto a cambios importantes y perturbadores debido a la penetración capitalista en las sociedades campesinas. Como explican Peet y Watts (1996: 5), a finales de la década de los setenta, la preocupación por la "integración en el mercado, la comercialización y la dislocación de las formas consuetudinarias de gestión de los recursos, más que por la adaptación y la homeostasis, se convirtieron en los pilares de una alternativa crítica a la antigua ecología humana o cultural". Aunque se evitaron algunos de los escollos de los enfoques adaptacionistas y sistémicos, gran parte de este trabajo sostiene que, al menos en el pasado, existían sistemas equilibrados, armoniosos y tradicionales, pero que las fuerzas del cambio moderno los habían perturbado.

Estos temas se convirtieron en los rasgos definitorios de la ecología política, término acuñado por primera vez en 1972 (Wolf, 1972). A menudo muy influidos por Blaikie y Brookfield (1987) y el modelo de cadenas de causalidad, surgieron una serie de estudios de caso que mostraban cómo, por ejemplo, los debates sobre la conservación del suelo (Blaikie, 1985), las interacciones entre agricultores y pastores (Bassett, 1988), la deforestación (Durham, 1995) o el uso de la tierra en la Amazonia (Hecht y Cockburn, 1990) se vieron influidos por la interacción de procesos políticos y ecológicos.

Este trabajo ha intentado vincular adecuadamente la comprensión de los microprocesos, más propios de la antropología ecológica, con procesos políticos e ideológicos estructurales más amplios. La aclaración por parte de Harvey (1974) de la noción de recursos como construidos social y políticamente ha sido fundamental en este debate y ha dado lugar a importantes

trabajos sobre cómo las perspectivas sobre el cambio ambiental deben medirse desde los puntos de vista de diferentes actores (Blaikie, 1995). Este tema ha sido retomado por formulaciones más recientes de la ecología política, que intentan ir más allá de una perspectiva estructuralista (Peet y Watts, 1996; Rocheleau *et al*., 1996) (véase más adelante). Sin embargo, aunque la comprensión del conocimiento, el poder y la política en relación con el ambiente ha avanzado a buen ritmo, este debate no ha asumido nuevas concepciones de la ecología, una laguna comentada cada vez más. (Zimmerer, 1996a).

Economía ambiental y ecológica

Tres corrientes de la literatura económica han ejercido una enorme influencia en la última década o dos. Para los economistas ambientales, las cuestiones relacionadas con los recursos naturales se han debatido en gran medida en términos de problemas de fallos del mercado derivados de externalidades y de la asignación racional de recursos escasos (Markandya y Richardson, 1992). Para los economistas ecológicos, se adopta un enfoque de sistemas coevolutivos, según el cual los sistemas económicos y ecológicos surgen juntos (Norgaard, 1994). Por último, para los economistas institucionales, una preocupación importante han sido las cuestiones de acción colectiva fundamentales para la gestión de los recursos comunes (por ejemplo, Ostrom, 1990; Bromley, 1992).

En cada uno de estos ámbitos de debate se ofrece una visión estática del ambiente y los recursos naturales. Uno de los temas principales es el de los límites y la capacidad de carga (Arrow *et al*., 1995). La "economía de la inminente nave espacial Tierra" (Boulding, 1992) y las analogías con los procesos biológicos en la "economía como ciencia de la vida" (Daly, 1992) forman parte de un énfasis recurrente en lo que Daly sostiene que son las características definitorias de "la finitud, la entropía y la compleja interdependencia ecológica [...] [que] se combinan para formar límites biofísicos fundamentales al crecimiento" (Daly, 1992: 37). Más recientemente, Barbier comentó que, "a través de la sucesión natural, los ecosistemas desarrollan complejos mecanismos de retroalimentación para garantizar su estabilidad" (1989: 40).

Esto no quiere decir que todos los argumentos económicos están ligados a modelos de sistemas homeostáticos simplistas o planteamientos que no tienen en cuenta la variabilidad y la incertidumbre en los entornos ambientales. Algunos autores se toman claramente en serio la variabilidad, incorporando elementos estocásticos a los modelos (Constanza *et al*., 1993). Las fructíferas interacciones entre ecólogos, economistas y otros científicos sociales convocados por el Instituto Beijer, por ejemplo, han establecido un programa de investigación que intenta desarrollar una teoría de las propiedades dinámicas de los sistemas económicos, sociales y ecológicos interdependientes, prestando atención a cuestiones como las propiedades de resiliencia, la escala y la jerarquía, las dinámicas discontinuas y complejas, y la dependencia de la trayectoria (Berkes y Folke, 1998).

Debates naturaleza-cultura

Un tema importante en el debate antropológico reciente ha sido la crítica de la división naturaleza-cultura, lo que Descola y Pálsson (1996: 12) consideran "el fundamento clave de la epistemología modernista" (véanse también Benton, 1991; Simmons, 1993; Smith, 1996; Soper, 1996; Braun y Castree, 1998). El trabajo etnográfico ha puesto de relieve que la distinción naturaleza-cultura es insostenible en diversos contextos (Croll y Parkin, 1992). Por otra parte, los argumentos basados en perspectivas alternativas evolucionistas (Levins y Lewontin, 1985) y biológicas (Ingold, 1990) sugieren que la naturaleza y la cultura deben considerarse creadas en conjunto. Con la aparición de la biotecnología, se crean nuevas formas de naturaleza y, debido al alcance globalizado de dichos "regímenes de naturaleza" (Escobar, 1999), se hacen evidentes nuevas articulaciones con los procesos sociales y culturales. Del mismo modo, las investigaciones sobre la práctica de la ciencia sugieren que la división naturaleza-cultura no puede sostenerse, ya que las "redes híbridas" de seres humanos, no humanos y artefactos se ven implicadas en los procesos de investigación científica (Haraway, 1991; Latour, 1993). Esto, a su vez, requiere la renegociación de los límites entre las ciencias sociales y naturales (Harding, 1991) o, lo que es más radical, la creación de una "antropología simétrica"

(Latour, 1993), en la que las divisiones naturaleza-cultura desaparezcan por completo.

En otros lugares se han producido debates similares. Por ejemplo, los sociólogos ambientales (Catton y Dunlap, 1978; Hannigan, 1995; Benton y Redclift, 1994; Buttel y Taylor, 1992; McNaghten y Urry, 1995; Woodgate y Redclift, 1998) han defendido (de diversas maneras) la apreciación de múltiples naturalezas, construidas socialmente y dotadas de diversos significados e interpretaciones. MacNaghten y Urry concluyen que "una de las principales tareas de las ciencias sociales consistirá en descifrar las implicaciones sociales de lo que siempre ha sido el caso, a saber, una naturaleza elaboradamente enredada y fundamentalmente ligada a las prácticas sociales y a sus modos característicos de representación cultural" (1998: 30).

Dicha perspectiva reconoce el conocimiento situado y necesariamente plural y parcial sobre el mundo natural (Haraway, 1991). El análisis de la naturaleza contrapuesta de distintos tipos de conocimiento en el contexto de unas relaciones de poder complejas, cambiantes, multicapa y multisituadas ofrece la posibilidad de poner de relieve tanto los efectos materiales como discursivos de las distintas narrativas sobre el cambio ambiental. Las nuevas corrientes de la ecología política, denominadas "ecologías de liberación" por Peet y Watts (1996), tienen este enfoque como tema central (véanse, por ejemplo, Escobar, 1996; Moore, 1996; Demerritt, 1994a).

Sin embargo, con la disolución de las distinciones naturaleza-cultura, tales análisis corren el peligro de adoptar formas limitantes de determinismo universalista (como muchas aplicaciones de la sociobiología) o bien variedades simplistas de relativismo cultural (como en algunas de las posiciones constructivistas más extremas). Por ejemplo, al criticar los argumentos del "paisaje como texto" de algunos de los promotores de la nueva geografía cultural (por ejemplo, Cosgrove y Daniels, 1988), Demerritt observa que "en momentos de extravagancia metafórica, la 'realidad' material del paisaje desaparece por completo" (Demerritt 1994b: 172). Al adoptar un enfoque realista y crítico ampliamente definido (Dickens, 1992; Sayer, 1993), Gandy sostiene que para "evitar el atolladero político y filosófico del relativismo

en la investigación medioambiental", es necesaria "una apreciación más sutil de la interrelación entre las bases ontológicas y epistemológicas del conocimiento a través de una mayor sensibilidad hacia la agencia de la naturaleza en el discurso social y científico" (1996: 35).

Muchos antropólogos adoptan una postura similar. Argumentando en contra de una postura relativista cultural poco útil (Milton, 1993; 1997), se proponen nuevos marcos generales que van más allá de los modelos dualistas simplistas (por ejemplo, Ellen, 1996; Palsson, 1996). Tales marcos permiten, al menos, el potencial del análisis comparativo, pero mantienen un firme vínculo con los contextos etnográficos y las perspectivas *emic*. Descola es optimista sobre las perspectivas de futuro de este tipo de enfoque, argumentando que "una vez que se haya eliminado la antigua cuadrícula ortogonal naturaleza-cultura puede surgir un nuevo paisaje antropológico multidimensional" (1996: 99).

Sin embargo, a pesar del énfasis en la contingencia histórica, la complejidad y los procesos abiertos de los análisis posestructuralistas, la atención se ha seguido casi de forma exclusiva en cuestiones del ámbito social. La falta de atención a las cuestiones ecológicas y a las dinámicas del cambio ambiental sigue siendo una laguna significativa que ha dado lugar a la exclusión de una serie de importantes líneas de investigación (véase más adelante).

El ecologismo y la aplicación de conceptos ecológicos

A pesar de las reflexiones más matizadas sobre las dinámicas ecológicas mencionadas antes, la inmensa mayoría de las reflexiones en ciencias sociales sigue recurriendo a las metáforas del equilibrio, la regulación y la armonía para enmarcar el debate. La idea de "armonía con la naturaleza no como un deseo humano sino como una necesidad impuesta por la naturaleza" (Harvey, 1993: 14) tiene un gran arraigo en el discurso académico y el pensamiento popular sobre las relaciones entre el ser humano y el ambiente.

No es sorprendente que los movimientos ecologistas de todo el mundo que surgieron a partir de la década de los setenta hayan adoptado estas metáforas y sus justificaciones asociadas para determinadas formas de acción.

El ecologismo popular tiene muchas caras. Pero ya sea en sus variantes tecnocéntricas, ecocéntricas, gerencialistas o ético-espirituales (Grove-White, 1993), el tema del equilibrio de la naturaleza nunca está lejos de la superficie. Según Porritt y Winner (1988), el pensamiento verde radical pretende "crear un nuevo orden social y económico que permita a los seres humanos vivir en armonía con el planeta (en Dobson, 1990: 9). Aunque en muchos aspectos el discurso ecologista se presenta como hostil a la ciencia moderna, al mismo tiempo suele depender de la autoridad social de una determinada corriente de la ciencia ecológica y de su aparente neutralidad y objetividad a la hora de hacer afirmaciones sobre la destrucción de la naturaleza, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o la superación de las capacidades de carga.

Las metáforas de la ecología del equilibrio se utilizan tanto para establecer posiciones éticas o morales como para justificar determinados proyectos tecnocéntricos o de gestión. Por ejemplo, Mies y Shiva (1993) defienden un estrecho vínculo entre las mujeres y una naturaleza armoniosa como parte de un argumento ecofeminista sobre las relaciones de género y la destrucción del ambiente. Del mismo modo, al explicar el concepto de desarrollo sostenible y la justificación de la intervención, Redclift (1987) recurre a la ecología de sistemas para justificar su postura: "Los controles homeostáticos que existen en las comunidades naturales y que les permiten lograr la sucesión solo son eficaces si estos ecosistemas están protegidos de los cambios rápidos" (1987: 18). Tales argumentos, por supuesto, han sido ampliamente criticados (por ejemplo, para el ecofeminismo, véase Jackson, 1993; Leach y Green, 1997; para el desarrollo sostenible, véase Adams y Thomas, 1995), pero la apropiación de perspectivas particulares en el pensamiento popular tiene ahora un alcance global, mucho más allá de los confines del debate académico, en el contexto de los movimientos ecologistas de todo el mundo (Yearley, 1994; Jamison, 1996). Así, el pensamiento del equilibrio, tal como se refleja a través de perspectivas tan diversas como la ecología profunda, el ecofeminismo o los movimientos de desarrollo sostenible, tiene una amplia gama de efectos prácticos. Las definiciones globalizadas de la naturaleza, a menudo debates ecologistas esencialmente nórdicos y reforzadas por las imágenes de los medios de comunicación (Burgess, 1990), se convierten en un elemento central a

la hora de formular políticas y debatir soluciones (Taylor y Buttel, 1992; Schroeder y Neumann, 1995; Leach *et al*., 1996).

Así, en las "narrativas del desarrollo" (Roe, 1991) que comunican la política y la práctica, una serie de conceptos centrales para el pensamiento del equilibrio en ecología se convierten en centrales para los discursos dominantes de intervención. La forma de contar, clasificar, etiquetar e interpretar el mundo natural surge de tradiciones particulares de las ciencias ecológicas y, a su vez, se integra en los regímenes de gestión y administración de los organismos estatales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los proyectos de desarrollo (Rangan, 1995; Rocheleau y Ross, 1995; Robbins, 1998a; Scott 1998). Las nociones de lo que es un bosque, lo que es el sobrepastoreo, lo que es la pérdida de suelo y lo que es una zona silvestre, derivadas de una visión particular de la ecología, se ven envueltas en las construcciones de determinadas personas —habitantes de los bosques, pastores, pequeños agricultores o pueblos indígenas— que a menudo se consideran los causantes de los problemas ambientales (Neumann, 1995; Brosius 1997). Las intervenciones derivadas de este tipo de análisis pueden tener consecuencias negativas para la población local. Por ejemplo, los estudios sobre intervenciones (agro) forestales respetuosas con el ambiente en Gambia (Schroeder, 1995; 1997), la República de Guinea (Fairhead y Leach, 1996) y la República Dominicana (Rocheleau *et al*., 1997) muestran los "resultados profundamente ambiguos de la intervención medioambiental local planteada a nivel global" (Schroeder y Neumann, 1995: 324).

¿Nuevos desafíos?

Entonces, ¿por qué las nuevas perspectivas ecológicas han tenido un impacto tan limitado en los comentarios académicos y públicos? Quizá solo sea una consecuencia de los tiempos de retraso de la comunicación transdisciplinaria: los diferentes lenguajes, marcos de referencia y enfoques metodológicos son claramente evidentes en todas las disciplinas. En efecto, gran parte del nuevo debate ecológico puede parecer insular e impenetrable para el profano no iniciado, a pesar de algunos excelen-

tes intentos de abordajes más populares (e.g. Botkin, 1990). Pero, como ya se ha dicho, dentro de las ciencias sociales, los marcos teóricos, ya estén arraigados en diversas formas de funcionalismo, estructuralismo, individualismo económico o incluso postestructuralismo, han planteado el debate de una manera particular, a menudo basando las discusiones sobre el ambiente en una visión de equilibrio, que excluye la posibilidad de involucrarse con los más nuevos debates sobre ecología. Esta exclusión conceptual se ve reforzada por las interacciones con los marcos públicos y políticos, ambos firmemente arraigados en un punto de vista de equilibrio, generados como parte de una construcción continua y mutua de ideas. En ocasiones, esta exclusión va de la mano de casi una negación de la influencia ambiental en las esferas social, económica o política por miedo a quedar atrapado en una posición determinista. Tal pensamiento, argumenta Williams (1994: 9), "congeló la mente crítica", hasta el punto de que Stoddart (1987: 336) se quejaba de que algunos se persuadían a sí mismos de que "el mundo físico no existe".

Este estancamiento parece estar llegando a su fin. En los últimos años, un número creciente de trabajos —tanto de forma implícita como explícita— ha establecido la agenda para una articulación más productiva entre los debates en la nueva ecología y las ciencias sociales. Este nuevo trabajo tiene importantes precedentes. Ya sea en los campos de la antropología ecológica, la ecología política, la economía ecológica o el análisis posestructuralista en torno al debate naturaleza-cultura, como se ha comentado antes, se pueden encontrar diversas pistas sobre los nuevos retos.

En esta sección, destacaré tres temas en torno a los cuales parecen articularse estos nuevos trabajos. Sin duda, podrían añadirse otros o sugerirse configuraciones diferentes, pero el espacio limita la exploración completa de todas las opciones. Cada uno de ellos tiene el potencial de tomar en serio los elementos centrales del nuevo pensamiento ecológico y explorar sus implicaciones de forma importante e interesante, a veces con importantes consecuencias prácticas para la planificación, el diseño de intervenciones y la gestión. En primer lugar, la preocupación por la dinámica espacial y temporal desarrollada en los análisis detallados y situados de las "personas en los lugares", utilizando, en particular, el

análisis histórico como forma de explicar el cambio ambiental a lo largo del tiempo y el espacio. En segundo lugar, la creciente comprensión del ambiente como producto y escenario de las interacciones humanas, que vincula los análisis estructurales dinámicos de los procesos ambientales con la valoración de la intervención humana en la transformación del medio, como parte de un enfoque de estructuración. En tercer lugar, la apreciación de la complejidad e incertidumbre de los sistemas socioecológicos y, con ello, el reconocimiento de que la predicción, la gestión y el control son improbables, si no imposibles.

Historias ambientales: comprender la dinámica espacial y temporal

El creciente interés por diversos tipos de historia ambiental (Williams, 1994; O'Connor, 1997) ha brindado importantes oportunidades para una articulación más firme con las preocupaciones de las dinámicas espaciales y temporales de la nueva ecología. Al prestar atención a los procesos de cambio del paisaje a lo largo del tiempo y a través del espacio, los historiadores del ambiente y los geógrafos históricos han empezado a desentrañar características clave de la compleja interacción entre el cambio social y ambiental. Williams señaló célebremente que "la idea de naturaleza contiene, aunque a menudo pase desapercibida, una extraordinaria cantidad de historia humana" (1980: 67). Sin embargo, Worster (1984: 1) se quejaba de que "hay poca historia en el estudio de la naturaleza […] Y hay poca naturaleza en el estudio de la historia". Sin embargo, en los quince años transcurridos desde aquel comentario, las cosas han cambiado.

Basándose en la tradición de los estudios sobre el paisaje establecida por Carl Sauer y sus colegas de la escuela de geografía de Berkeley (Price y Lewis, 1993; Rowntree, 1996), así como una preocupación más amplia por las interacciones entre paisaje e historia (Glacken, 1967; Schama 1995), los historiadores del ambiente, sobre todo en Estados Unidos, han llevado a cabo una serie de análisis influyentes de la interacción de los cambios económicos, ambientales, sociales y políticos (por ejemplo, Worster, 1979; 1985; Cronon, 1983; 1990; Silver, 1990; White, 1990; Hurley, 1995), cada

uno de los cuales toma a la naturaleza como un actor histórico significativo (Merchant, 1989: 7). En otros lugares, los historiadores de la ciencia y la política ambiental colonial en diversos contextos (por ejemplo Grove, 1995; Beinart, 1989; McCann, 1995; Griffiths y Robin, 1997) han asumido el reto de documentar los contextos históricos del cambio ambiental.

Este trabajo ha tenido un compromiso variable con el pensamiento ecológico. Worster, en particular, ha mantenido una fuerte lealtad al equilibrio, al pensamiento del equilibrio de la naturaleza, como una forma de explicar el tipo de perturbaciones provocadas por los distintos tipos de expansión colonial y capitalista (Worster, 1979). En cambio, otros han adoptado el nuevo pensamiento ecológico con más entusiasmo. Cronon (1990), por ejemplo, comenta cómo la atención de los ecologistas a la historia ha cuestionado muchos de los supuestos centrales de las narrativas de los historiadores ambientales: "Irónicamente, sus esfuerzos [de los ecologistas] por entender los ecosistemas en términos más históricos les han hecho desconfiar de los propios modelos de 'comunidad' ecológica —estables, auto equilibrados, orgánicos, funcionales— en los que se basan nuestros propios argumentos sobre el equilibrio de la naturaleza. Nosotros [los historiadores del ambiente] tenemos que lidiar con sus argumentos, ya que muchos de nuestros análisis concluyen que las comunidades humanas (especialmente las capitalistas) a menudo han desestabilizado radicalmente los ecosistemas de los que dependen […] Ya no podemos suponer la existencia de una comunidad estática y benigna en la naturaleza que contrasta con el cambio humano dinámico pero destructivo" (1990: 1127-28).

El interés por la compleja intersección de los cambios sociales, políticos, económicos y ambientales ha provocado una amplia gama de nuevos trabajos en los últimos años (Headland, 1997). Aunque se basan en la tradición de la historia ambiental, son evidentes algunas nuevas direcciones metodológicas. Utilizando diversos métodos "híbridos" e interdisciplinarios (cf Batterbury *et al*., 1997; Rocheleau, 1995), que hacen hincapié en la comprensión de los procesos sociales y ecológicos contemporáneos en un contexto histórico, han surgido nuevas e importantes perspectivas que se oponen a las visiones convencionales malthusianas y de equilibrio de la naturaleza.

Estos enfoques no solo se basan en la autoridad de una ciencia abstracta e independiente que hable en nombre de la naturaleza, con una narrativa construida del cambio que sigue una visión particular de la ecología (Demeritt, 1994b). En lugar de ello, una serie de métodos —cuantitativos, cualitativos y textuales— procedentes tanto de las ciencias naturales como de las sociales conforman un tipo de estudio más integrado, que investiga los procesos reales de cambio ambiental y paisajístico; los procesos sociales, políticos y económicos que influyen en el cambio ambiental y se ven condicionados por él, así como los símbolos culturales, las interpretaciones y los significados culturales de dicho cambio. Tales planteamientos se inspiran en una serie de enfoques que de manera convencional podrían denominarse antropológicos, pero se combinan juiciosa y ecléctica mente con metodologías derivadas de otras tradiciones de las ciencias sociales, entre ellas la historia ambiental y la geografía histórica, política y cultural.

Inspirándose en los estudios ya clásicos de Netting (1968; 1993), Richards (1985) y otros, los trabajos recientes sobre el cambio agrario (por ejemplo, Tiffen *et al*., 1994; Amanor, 1994; Stone, 1996; Batterbury, 1997; Nyerges, 1997; Brookfield y Padoch, 1994; Zimmerer, 1996b), las tierras áridas y la desertificación (Little, 1994; Dahlberg, 1994; Mortimore, 1998) la dinámica forestal (Peluso, 1994; Moore y Baughan, 1994; Padoch y Peluso, 1996; Fairhead y Leach, 1996; Rocheleau *et al*., 1997; Cline-Cole, 1998; Dove, 1992; 1993; Sivaramakrishnan, 1999), la gestión de suelos (Scoones, 1997; Sillitoe, 1996; Wilson, 1995), ganadería y pastizales (Warren, 1995; Sullivan, 1996; Homewood y Rodgers, 1991; Roe *et al*., 1998), sistemas montañosos (Ives, 1987; Forsyth, 1998; Price y Thompson, 1997), parques nacionales y la fauna salvaje (Adams, 1997; Brockington y Homewood, 1996), y la gestión del agua (Mehta, 1998; Mosse 1997) ha aportado nuevos e importantes conocimientos históricos sobre los procesos de cambio ambiental en diversos entornos.

Varios de estos estudios han demostrado, por ejemplo, cómo los paisajes han sido creados por la acción humana, incluyendo características ambientales como legado de acciones pasadas, tanto intencionadas como no intencionadas. Ya se trate de parcelas de suelo muy fértil, islas de distintos tipos de vegetación o zonas de degradación del suelo, es esencial

comprender la historia del uso de la tierra y la intersección de los procesos sociales, institucionales, políticos y económicos a lo largo del tiempo. Estos estudios hacen hincapié en la diversidad y la complejidad de las pautas de cambio espacial y temporal, que resuenan con fuerza en los temas de la dinámica no lineal, los límites múltiples y la importancia de la interacción socioecológica en la nueva ecología. Estos enfoques históricos han sido una base importante para la reconceptualización de la dinámica del cambio humano-ambiental, un tema que, como se expone a continuación, ofrece algunas nuevas y fructíferas direcciones.

Estructura, agencia y escala en el cambio ambiental

El nuevo pensamiento ecológico sugiere que no existe una relación directa entre las personas y el ambiente en los procesos de cambio ambiental. El ambiente se crea dinámica y recursivamente de forma no lineal, no determinista y contingente. Los procesos sociales, políticos, económicos y ecológicos interactúan de manera dinámica, por lo que el análisis debe ser sensible a la interacción de las características estructurales y la agencia humana a distintas escalas, desde la local a la global. Tales perspectivas exigen un análisis que vaya más allá de los simples modelos funcionalistas, adaptacionistas y deterministas que han dominado la antropología ecológica y enfoques similares utilizados en las ciencias sociales en el pasado.

El hecho de que las interacciones entre población y recursos son problemáticas se reconoce desde hace tiempo en los argumentos de las ciencias sociales. Por ejemplo, los trabajos basados en el análisis marxista han subrayado la importancia de una relación dialéctica entre el entorno natural y la acción de los pueblos (Collins, 1992). El cambio se considera una "necesidad generada internamente" (Harvey, 1974: 235), en la que las contradicciones quedan al descubierto. Así, "el propio diseño del ecosistema transformado es una muestra de sus relaciones sociales […] los ecosistemas creados tienden a instanciar y reflejar […] los sistemas sociales que les dieron origen" (Harvey, 1993: 27). Asimismo, los enfoques coevolutivos (por ejemplo, Norgaard, 1994; Redclift y Woodgate, 1994) consideran que

el ambiente y la acción humana son mutuamente constitutivos, como parte de un proceso de adaptación evolutiva a más largo plazo.

Aunque estos debates han proporcionado un importante telón de fondo para las discusiones actuales, la apreciación del pensamiento de no equilibrio en ecología plantea nuevos retos para las investigaciones en ciencias sociales. Por distintas razones, tanto las posturas dialécticas como las coevolutivas, por ejemplo, dan poco espacio para las cuestiones fundamentales de la complejidad, la diferencia y el cambio contingente inesperado, las cuales son tan importantes en el nuevo pensamiento ecológico. No obstante, el argumento más general sigue siendo que la apreciación de la interacción de la estructura y la agencia por medio de las escalas debe ser la pieza central de una comprensión dinámica de la interacción entre las personas y el ambiente. A este respecto, el concepto de estructuración de Giddens (1984) resulta útil, ya que apunta a la continua interacción dinámica entre estructura y agencia, sedimentada en el espacio y el tiempo. Las cuestiones de escala, en particular, son fundamentales para este debate (Gibson *et al*., 1998), ya que estas interacciones pueden producirse a escalas entre lo local y lo global, con dinámicas que operan a ritmos diferentes en las distintas escalas (Driver y Chapman, 1996). Estas "jerarquías anidadas" de interacción entre sistemas (véase Gunderson *et al*., 1995) son de especial importancia dado el alcance espacial y la complejidad de los procesos globales de cambio ambiental a los que nos enfrentamos hoy en día.

Así pues, los entornos a diferentes escalas son a la vez el producto y el modelo de la acción humana. Esta perspectiva implica que los sistemas socioecológicos son necesariamente el resultado de una mezcla de cambios continuos y discontinuos en un contexto particular, caracterizados por dinámicas complejas, dependientes de la trayectoria y, por lo general, no lineales. A continuación, destaco dos importantes líneas de trabajo que adoptan este tipo de perspectiva, incorporando cada vez de forma más explícita perspectivas de la nueva ecología.

Los estudios de los procesos por los que las prácticas locales —agricultura, gestión del suelo, tala de árboles, gestión de humedales, quemas, pastoreo, caza, etc.— influyen en los entornos a lo largo del tiempo revelan

cómo la combinación de acciones intencionadas y no intencionadas de distintos agentes sociales puede culminar en cambios significativos en los entornos y las dinámicas ecológicas. Se plantean preocupaciones similares a las destacadas por los historiadores del ambiente en torno a los paisajes creados antropogénicamente, aunque esta línea de trabajo surge de un análisis ecológico y etnográfico mucho más centrado en los saberes y las prácticas locales. Al basarse en las teorías de la práctica (véanse Bourdieu, 1977; Ortner, 1984), y al ir más allá de los planteamientos descriptivos, a menudo descontextualizados, de la etnoecología, dichos enfoques de la "ecología de la práctica" (véase Nyerges, 1997) revelan aspectos importantes de la naturaleza contingente y dinámica del cambio ambiental y de cómo este se encuentra ligado de forma íntima a los procesos sociales y culturales. Como comenta Nyerges (1997: 11), "las implicaciones metodológicas de la ecología de la práctica consisten en distinguir a los actores en función de su estatus social, examinar el acceso a los medios de producción y su control, y mostrar cómo el conflicto por el control tiene consecuencias para la explotación y la gestión de recursos específicos a medida que se incorporan a las vidas sociales individuales". Una amplia gama de estudios ha adoptado enfoques de este tipo, cada vez con una comprensión más sofisticada y bien fundamentada de las cuestiones ecológicas, así como sociales y culturales (por ejemplo, Richards, 1986; Amanor, 1994; Leach, 1994; Fairhead y Leach, 1996; Sillitoe, 1996; Nyerges, 1997).

Estos estudios, en gran medida microeconómicos, se complementan de forma útil con una apreciación más amplia de los procesos institucionales y políticos que median en la relación entre agencia y estructura a múltiples escalas en los procesos de cambio social y ambiental. Sin embargo, gran parte de la literatura institucional centrada en la gestión de los recursos naturales y el cambio ambiental ha adoptado un enfoque limitado, formalizado del análisis, que considera los resultados institucionales como el producto de las interacciones repetidas de actores racionales individuales, por ejemplo, en las formulaciones de teoría de juegos de la teoría de propiedad común (véanse Berkes, 1989; Ostrom, 1990; Bromley, 1992; Hanna *et al*., 1996). Aunque esta línea de trabajo ha supuesto un importante contrapunto a la perspectiva de la "tragedia de los bienes comunes" (Hardin, 1968),

quizá no ha prestado suficiente atención a la forma en que los acuerdos institucionales, tanto formales como informales, surgen en el contexto de los entornos variables e inciertos descritos por la nueva ecología. También en este caso, las perspectivas antropológicas ofrecen perspectivas importantes. Las instituciones, vistas como el producto de prácticas sociales controvertidas que están cultural e históricamente arraigadas, a menudo con asociaciones simbólicas y significados vinculados, se muestran bajo una luz diferente a las representaciones descontextualizadas, a menudo de organizaciones fijas ofrecidas por la literatura institucional dominante.

Los análisis institucionales de este tipo (por ejemplo, Berry, 1989; Peters, 1994; Mosse, 1997; Leach *et al*., 1999; Schroeder, 1997; Robbins, 1998b; Agrawal y Sivaramakrishnan, 2000) muestran cómo los diferentes acuerdos institucionales asociados a las distintas redes de agentes locales y no locales dan lugar a diferentes paisajes y dinámicas ecológicas. Por tanto, las pautas de autoridad se inscriben en los paisajes y se reflejan en las pautas y procesos ecológicos; los espacios físicos y las características biofísicas se socializan e institucionalizan con el tiempo, y las localidades se producen (Appadurai, 1997) mediante las interconexiones institucionales y políticas en el espacio y el tiempo. Por tanto, desde esta perspectiva, los modelos y procesos ecológicos se consideran profundamente integrados en los sociales e institucionales, como parte de una interacción continua, aunque muy diferenciada.

Complejidad e incertidumbre: implicaciones para las percepciones, la política y la práctica

La nueva ecología aporta importantes conocimientos sobre la complejidad y la no linealidad de los sistemas ecológicos. Esto tiene una serie de consecuencias importantes para las percepciones políticas y prácticas ambientales. La incertidumbre, la indeterminación y la sorpresa en la dinámica ecológica son fundamentales (Ludwig *et al*., 1993; Hilborn y Ludwig, 1993). Como afirma Holling (1993: 553), "el conocimiento del sistema con el que tratamos es siempre incompleto. La sorpresa es inevitable. No solo la ciencia es incompleta, sino que el propio sistema es un blanco móvil".

Este reconocimiento ha impulsado la aparición de un tipo diferente de ciencia ecológica, que va más allá de la tradición newtoniana de explicación mecanicista basada en análisis experimentales reduccionistas y controlados, hacia una ciencia que es integradora y holística y que se centra en la variabilidad y la incertidumbre como algo absolutamente fundamental, en lugar de como "ruido" que hay que excluir del análisis (Holling *et al*., 1998). Esto es lo que caracteriza a la nueva ecología, pero cada vez más también a otros ámbitos de la investigación científica en los que son fundamentales la complejidad y la dinámica no lineal (Hilborn y Ludwig, 1993; Funtowicz y Ravetz, 1994). Holling (1993: 553) argumenta que es "esta corriente la que tiene la conexión más natural con otras afines a las ciencias sociales que son históricas, analíticas e integradoras. También es la corriente más relevante para las necesidades de la política y las políticas públicas".

Las cuestiones del riesgo, la incertidumbre y la indeterminación también han preocupado a los sociólogos que estudian los problemas epistemológicos que rodean el proceso de investigación científica y las respuestas públicas y políticas a los problemas ambientales (Wynne, 1994). Este trabajo, en particular, pone de relieve algunas áreas importantes en las que nuestra comprensión de las percepciones, políticas y prácticas ambientales se ve cuestionada por una perspectiva alternativa sobre cuestiones de complejidad e incertidumbre en la ciencia. Si la comprensión de la ciencia es necesariamente incompleta y fragmentaria, ya que se basa en cuestiones fundamentales de incertidumbre, entonces la percepción de las cuestiones ambientales es clave para la política y la acción. Dado que los conocimientos científicos son siempre provisionales, aumentan las posibilidades de impugnación y negociación, para dar lugar a lo que Wynne (1996: 77) denomina "la negociabilidad epistémica más amplia del conocimiento fiable de la naturaleza". En tales contextos, los conocimientos múltiples —tanto científicos como el del público lego— adquieren importancia en los procesos de decisión sobre qué hacer. Estos procesos de apertura del debate sobre cuestiones ambientales pueden servir para cuestionar ortodoxias o saberes convencionales que, en el pasado, han dominado la comprensión de las cuestiones ambientales (Leach *et al*., 1996) y han constituido la base de las narrativas del desarrollo

que vinculan los supuestos sobre los problemas ambientales con la política y la acción (Roe, 1991).

Sin "una naturaleza estable y asocial que nos diga lo que tenemos que hacer" (Szesrzynski, 1996: 113), los enfoques estándar para gestionar la intervención que siguen los modelos convencionales de la ecología son claramente inadecuados. Así, los campos de gestión aplicada de la ecología, con sus modelos estáticos y prescriptivos de capacidad de carga, rendimiento máximo sostenido, etc., parecen cada vez más inapropiados con esta nueva perspectiva. Del mismo modo, el amplio discurso empresarial que rodea gran parte del debate sobre el "desarrollo sostenible" Redclift, 1992; Worster, 1993b) parece sospechoso. Entonces ¿cuál es la alternativa a este enfoque gerencialista? Se han hecho varias sugerencias. En general, convergen en torno a lo que se ha denominado "gestión adaptativa" (Holling, 1978; Walters, 1976). Este planteamiento implica respuestas graduales a los problemas ambientales, con un estrecho seguimiento y un aprendizaje interactivo integrado en el proceso, de modo que se pueda responder a los umbrales y las sorpresas (Folke *et al*., 1998).

De este análisis se desprenden una serie de retos fundamentales, susceptibles de ser investigados antropológicamente de diversas maneras. De gran importancia es la comprensión de los procesos de interacción de los distintos tipos de conocimiento sobre cuestiones ambientales en condiciones de incertidumbre científica. Para entender la negociación de los conocimientos, tanto científicos como legos, es necesario comprender el marco y la construcción del conocimiento ambiental y los modos de discurso que surgen durante los debates (Apthorpe, 1996; Grillo y Stirrat, 1997). Para ello es necesario ir más allá de la cosificación y la separación analítica del conocimiento científico o local, popular o indígena (Agrawal, 1995) y concentrarse en los complejos procesos de negociación epistémica en diferentes entornos (Wynne, 1996).

Estas ideas apuntan a la necesidad de investigar la "ciencia en acción" (Latour, 1987), incluyendo las prácticas de los científicos en sus laboratorios, pero también las de los agentes de extensión, los gestores de campo, los asistentes de proyectos y la población local en el proceso de puesta en

marcha. El enfoque antropológico clásico, tan eficazmente aplicado en el contexto local con los agricultores y otros gestores de recursos, puede ampliar fructíferamente su alcance a una gama más amplia de actores y sus interacciones (véanse, por ejemplo, Cussins, 1996; Sivaramakrishnan, 1996). Por lo general, es en el marco de la práctica cotidiana de la gestión adaptativa —o lo que Richards (1989) denomina, en el contexto de la agricultura, rendimiento agrícola— donde deben tener lugar las negociaciones clave sobre el conocimiento en entornos inciertos, ya sea a escala local, nacional o internacional.

Las cuestiones de complejidad e incertidumbre en la ciencia ecológica también sugieren vías de investigación relacionadas con el contexto institucional y organizativo de la gestión ambiental. Una vez más, este sigue siendo un ámbito poco explorado de la investigación antropológica. Algunos comentaristas, basándose en el análisis de sistemas, abogan por enfoques adaptativos, coevolutivos de lo que se ha dado en llamar organizaciones de aprendizaje como respuesta a sistemas ecológicos complejos e inciertos (Lee, 1993). Otros, basándose en la teoría de la gestión y la organización, señalan la necesidad de diseñar instituciones y organizaciones de alta fiabilidad (Rochlin, 1996, en Roe *et al*., 1998). Pero muchos de estos trabajos restan importancia a la base informal y cultural de las instituciones y organizaciones (Wright, 1994) y, en particular, a cómo las relaciones de confianza dentro de las organizaciones se sustentan en relaciones y redes sociales. En este sentido, las ideas procedentes de enfoques más antropológicos pueden ayudar a relacionar una comprensión más matizada en el plano micro de los procesos sociales con debates más amplios sobre los retos de la democracia "discursiva" y "deliberativa" (Dryzek, 1990), la naturaleza cambiante de las instituciones de expertos (Jasanoff, 1992) y su relación con lo que se ha caracterizado como la "sociedad del riesgo" (Beck, 1992) en contextos posindustriales.

Conclusión

Los tres temas mencionados con anterioridad —historia ambiental; estructura, agencia, escala, y complejidad e incertidumbre— plantean importantes retos para el trabajo futuro y el potencial real de avanzar hacia

un compromiso más amplio entre las ciencias sociales y las naturales, que quizá no existía en tal medida cuando Orlove se quejó de la falta de interacción en 1980. Dentro de cada tema, las preocupaciones relativas a la historia, la variabilidad, la dinámica, la complejidad y la incertidumbre, ya establecidas desde hace tiempo en el nuevo pensamiento ecológico, también han surgido como focos importantes en los debates de las ciencias sociales sobre cuestiones ambientales, y ofrecen la posibilidad de una gama diversificada de percepciones de las interacciones sociales y ecológicas, percepciones que van más allá de la visión limitadora del equilibrio de la naturaleza que ha dominado los debates académicos y políticos en el pasado.

El examen de cada tema pone de manifiesto la necesidad de abarcar todas las disciplinas de las ciencias sociales —antropología, geografía, historia, economía institucional, ciencias políticas, estudios científicos, sociología y otras áreas— si se quiere lograr una articulación más plena con las cuestiones planteadas por el nuevo pensamiento ecológico. Teniendo presente este reto interdisciplinar, concluyo con una reflexión sobre algunas de las cuestiones conceptuales, metodológicas y político-prácticas que se plantean.

En primer lugar, en cuestiones más conceptuales, el creciente reconocimiento de la necesidad de ir más allá de la restrictiva división naturaleza-cultura nos empuja a cuestionar otras dicotomías poco útiles y fomenta así un estilo de investigación más integrador. Este enfoque, por ejemplo, reúne el análisis estructural y el centrado en la agencia, considera de manera conjunta el conocimiento local y el científico, e integra lo natural y lo social en la exploración del cambio ambiental. Dicha perspectiva también permite la apreciación simultánea de asuntos de representación del paisaje y de la naturaleza y el proceso material del cambio ambiental. La interacción entre estas dos perspectivas —las percepciones y representaciones construidas socialmente y los procesos reales de cambio biofísico y dinámica ecológica— es clave para la política y la práctica.

A continuación, se plantean una serie de cuestiones metodológicas. La hibridez, el eclecticismo innovador y la interdisciplinariedad describen el enfoque necesario que combina la comprensión del cambio ecológico con

análisis históricos y enfoques etnográficos e interpretativos más cualitativos como parte de una investigación multisituada (véase Marcus, 1995) y con múltiples actores (Long y Long, 1992). Aunque opere en los intersticios de los departamentos académicos y fuera de la corriente principal de las revistas convencionales, se está llevando a cabo una gran cantidad de trabajo interesante e innovador que está empujando rápidamente las fronteras conceptuales y metodológicas en este ámbito.

Este nuevo trabajo tiene importantes implicaciones para la política y la práctica que solo se están empezando a explorar. Por ejemplo, las consecuencias de la complejidad y la incertidumbre en los sistemas sociales y ecológicos tienen importantes implicaciones para nuevos campos de investigación aplicada a los procesos políticos, el diseño institucional y organizativo, y los enfoques de implantación que tienen en cuenta los principios de gestión adaptativa, aprendizaje y deliberación inclusiva.

En todos los frentes, pues, se está abriendo un amplio abanico de nuevos ámbitos para la articulación fructífera entre la nueva ecología y las ciencias sociales, cuyos productos esperamos que se conviertan en elementos centrales de futuras revisiones en este importante campo.

Reconocimientos

Los temas tratados en esta revisión han sido fundamentales para el trabajo del Environment Group del IDS en los últimos años. Quisiera dar las gracias a Andrea Cornwall, Tim Forsyth, James Keeley, Melissa Leach, Lyla Mehta, K Sivaramakrishnan, Sally Anne Way y Will Wolmer por sus comentarios en borradores anteriores. Además, me gustaría dar las gracias a las siguientes personas por sus generosas contribuciones a una solicitud de información durante la preparación de este ensayo: Bill Adams, Simon Batterbury, Gordon Conway, Carl Folke, Janice Jiggins, Ray Ison, James McCann, Michael Mortimore, Charles Perrings, Michel Pimbert, Jules Pretty, Diane Rocheleau, Emery Roe, Paul Sillitoe, Sian Sullivan, Andrew Warren y Graham Woodgate.

Referencias[2]

Acheson, J. y J. Wilson. (1998). Order out of chaos: the case for parametric fisheries management. *American Anthropologist*, *98*, 579-594.

Adams, W. (1997). Rationalisation and conservation: ecology and the management of nature in the United Kingdom. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *22*, 277-291.

Adams, W. y D. Thomas. (1995). Mainstream sustainable development: the challenge of putting theory into practice. *Journal of International Development*, *5*, 591-604.

Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change*, *26*, 413-439.

Agrawal, A. y K. Sivaramakrishnan. (2000). *Agrarian environments: resources, representations and rule in India*. Duke University Press.

Allen, T. y T. Starr. (1982). *Hierarchy: perspectives for ecological complexity*. University of Chicago Press.

Amanor, K. (1994). *The new frontier: farmers' response to land degradation. A West African study.* Zed Books.

Appadurai, A. (1997). *Modernity at large: cultural dimensions of globalization*. Oxford University Press.

Apthorpe, R. (1996). Reading development policy and policy analysis: on framing, naming, numbering and coding. En R. Apthorpe y D. Gasper (eds.). *Arguing development policy: frames and discourses* (pp. 16-35). Frank Cass / EADI.

2 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original.

Arrow, K., R. Costanza, P. Dasgupta, C. Folke, C. S. Holling *et al*. (1995). Economic growth, carrying capacity, and the environment. *Science*, *268*, 520-521.

Barbier, E. (1989). *Economics, natural resource scarcity and development: conventional and alternative views.* Earthscan.

Barth, F. (1966). *Models of social organization.* Royal Anthropological Institute (RAI).

Bassett, T. (1988). The political ecology of peasant-herder conflicts in the Northern Ivory Coast. *Annals of the American Association of Geographers*, *78*, 453-472.

Batterbury, S. (1997). *The political ecology of environmental management in semi-arid West Africa: case studies from the Central Plateau, Burkina Faso* [tesis de doctorado, Clark University, Worcester, UK].

Batterbury, S., T. Forsyth y K. Thompson. (1997). Environmental transformations in developing countries: hybrid research and democratic policy. *Geographical Journal*, *163*, 126-132.

Beck, U. (1992). *Risk society: towards a new modernity*. Sage.

Behnke, Robert e Ian Scoones. (1993). Rethinking range ecology: implications for rangeland management in Africa. En R. Behnke, I. Scoones y C. Kerven (eds.). *Range ecology at disequilibrium: new models of natural variability and pastoral adaptation in African savannas* (pp. 1-30). Overseas Development Institute.

Beinart, W. (1989). Introduction: the politics of colonial conservation. *Journal of Southern African Studies*, *15*, 2.

Bennett, J. (1976). *The ecological transition: cultural anthropology and human adaptation*. Pergamon.

Bennett, J. W. (1993). *Human ecology as human behaviour— Essays in environmental and developmental anthropology.* Transaction Books.

Benton, T. (1991). Biology and social science. *Sociology*, *25*, 27-49.

Benton, T. y M. Redclift. (1994). Introduction. En M. Redclift y T. Benton (eds.). *Social theory and global environmental change* (1-27). Routledge.

Berkes, F. (1989). *Common property resources: ecology and community-based sustainable resource development*. Belhaven.

Berkes, F. y C. Folke (eds.). (1998). *Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience*. Cambridge University Press.

Berry, S. (1989). Social institutions and access to resources in African agriculture. *Africa*, *59*, 41-55.

Blaikie, P. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries*. Longman Sci.

Blaikie, P. (1995). Changing environments or changing views? A political ecology for developing countries. *Geography*, *80*, 203-214.

Blaikie, P. y H. Brookfield. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.

Boserup, E. (1965). *The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure*. Allen & Unwin.

Botkin, Daniel B. (1990). *Discordant harmonies: a new ecology for the twenty-first century*. Oxford University Press.

Boulding, K. (1992). The economics of the coming spaceship Earth. En A. Markandya y J. Richardson (eds.). *The Earthscan reader in environmental economics* (27-35). Earthscan.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Bramwell, Anna. (1989). *Ecology in the 20th century: a history*. Yale University Press.

Braun, B. y N. Castree (eds.). (1998). *Remaking reality: nature at the millennium*. Routledge.

Brockington, D. y K. Homewood. (1996). Wildlife, pastoralists and science: debates concerning Mkomazi Game Reserve, Tanzania. En M. Leach, R. Mearns e I. Scoones (eds.). *The lie of the land: challenging received wisdom on the African environment* (91-104). Currey.

Bromley, D. (1992). The commons: property and common property regimes. En D. Bromley (ed.). *Making the commons work* (3-16). Institute for Contemporary Studies.

Brookfield, H. (1964). Questions on the human frontiers of geography. *Economic Geography*, *40*, 283-303.

Brookfield, H. y C. Padoch. (1994). Appreciating agro-diversity: a look at dynamics and diversity of indigenous farming practices. *Environment*, *36*, 37-45.

Brosius, P. (1997). Endangered forest, endangered people: environmentalist representations of indigenous knowledge. *Human Ecology*, *25*, 47-69.

Bryant, R. (1992). Political ecology: an emerging research agenda in third world studies. *Political Geography*, *11*, 12-36.

Bryant, R. y S. Bailey. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.

Burgess, J. (1990). The production and consumption of environmental meanings in the mass media: a research agenda for the 1990s. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *15*, 139-161.

Burton, I., R. Kates y G. White. (1978). *The environment as hazard*. Oxford University Press.

Buttel, F. y P. Taylor. (1992). Environmental sociology and global environmental change: a critical assessment. *Society & Natural Resources*, *5*, 211-230.

Butzer, K. (1989). Cultural ecology. En G. Gaile y C. Willmott (eds.). *Geography in America* (192-208). Merrill.

Catton, W. y R. Dunlap. (1978). Environmental sociology: a new paradigm? *American Sociologist*, *13*, 41-49.

Chesson, P. y T. Case. (1986). Overview: nonequilibrium theories: chance, variability, history, and coexistence. En J. Diamond y T. Case (coordss.). *Community ecology* (229-239). Harper & Row.

Clements, F. (1916). Plant succession: an analysis of the development of vegetation. *Carnegie Institution Publication No. 241*. Carnegie Institution of Washington.

Cline-Cole, R. (1998). Knowledge claims and landscape: alternative view of the fuelwood-degradation nexus in Northern Nigeria. *Environment and Planning D: Society and Space*, *16*, 311-346.

Collins, J. (1992). Marxism confronts the environment: labour, ecology and environmental change. En S. Ortiz y S. Lees (eds.). *Understanding economic process. Monographs in economic anthropology 10* (179-188). University Press of America.

Conklin, H. (1954). An ethnoecological approach to shifting agriculture. *Transactions of the New York Academy of Sciences*, *17*, 133-142.

Connell, J. y W. Sousa. (1983). On the evidence needed to judge ecological stability or persistence. *The American Naturalist*, *121*, 789-824.

Conway, G. (1987). The properties of agroecosystems. *Agricultural Systems*, *24*, 95-117.

Cosgrove, D. y S. Daniels (eds.). (1988). *The iconography of landscape.* Cambridge University Press.

Costanza, R., L. Wainger, C. Folke y K.-G. Maler. (1993). Modeling complex ecological economic systems. *BioScience*, *43*, 545-555.

Croll, E. y D. Parkin (eds.). (1992). *Anthropology, the environment and development.* Routledge.

Cronon, W. (1983). *Changes in the land: Indians, colonists and the ecology of New England*. Hill & Wang.

Cronon, W. (1990). Modes of prophecy and production: placing nature in history. *The Journal of American History*, *76*, 1122-1131.

Cussins, C. (1996). Ranchers, scientists and grassroots development in the US and Kenya [ponencia en *Science, Development, and Democracy Conference*, Department of Science and Technology Studies, Cornell University, noviembre].

Dahlberg A. (1994). *Contesting view and changing paradigms. The land degradation debate in Southern Africa*. Discussion Paper 6. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

Daly, H. (1992). The economic growth debate: what some economists have learned but many have not. En A. Markandya y J. Richardson (eds.). *The Earthscan reader in environmental economics* (36-49). Earthscan.

De Angelis, D. y J. Waterhouse. (1987). Equilibrium and nonequilibrium concepts in ecological models. *Ecological Monographs*, *57*, 1-21.

Demeritt D. 1994a. Ecology, objectivity and critique in writings on nature and human societies. J. Hist. Geogr. 201:22–37.

Demeritt D. 1994b. The nature of metaphors in cultural geography and environmental history. Prog. Hum. Geogr. 18:163–85.

Denevan W. 1983. Adaptation, variation and cultural geography. Prof. Geogr. 35: 399–407.

Descola, P. (1996). Constructing natures: symbolic ecology and social practice. En P. Descola y G. Pálsson (eds.). *Nature and society* (82-102). Routledge.

Descola, P. y G. Palsson (eds.). (1996). *Nature and society.* Routledge.

Dickens, P. (1992). *Society and nature: towards a green social theory.* Harvester Wheatsheaf.

Diener, P., D. Nonini y E. E. Robkin. (1980). Ecology and evolution in cultural anthropology. *Man*, *15*, 1-31.

Dobson, A. (1990). *Green political thought.* Routledge.

Dove, M. (1992). The dialectical history of 'jungle' in Pakistan: an examination of the relationship between nature and culture. *Journal of Anthropological Research*, *48*, 231-253.

Dove, M. (1993). A revisionist view of tropical deforestation and development. *Environmental Conservation*, *20*, 17-24.

Driver, T. y G. Chapman (eds.). (1996). *Time scales and environmental change.* Routledge.

Dryzek, J. (1990). *Discursive democracy: politics, policy and political science*. Cambridge University Press.

Dublin H., Sinclair A. y McGlade J. (1990). Elephants and fire as causes for multiple stable states in Serengeti-Mara woodlands. *Journal of Animal Ecology*, *59*, 1147-1164.

Durham, W. (1995). The political ecology of environmental destruction in Latin America. En N. Painter y W. Durham (coords.). *The social causes of tropical deforestation in Latin America* (249-264). University of Michigan Press.

Dyson-Hudson, R. y E. Smith. 1978. Human territoriality: an ecological reassessment. *American Anthropologist*, *80*, 21-41.

Earle, C., K. Matthewson y M. Kenzer (eds.). (1996). *Concepts in human geography.* Rowman and Littlefield Publishers.

Ellen, R. (1996). The cognitive geometry of nature: a contextual approach. En P. Descola y G. Palsson (eds.). *Nature and society* (103-124). Routledge.

Ellis, J. y D. Swift. (1988). Stability of African pastoral ecosystems: alternative paradigms and implications for development. *Journal of Range Management*, *41*, 450-459.

Elner, S. y P. Turchin. (1995). Chaos in a noisy world: new methods and evidence from time series analysis. *American Naturalist*, *153*, 343-375.

Elton, C. (1930). *Animal ecology and evolution.* Oxford University Press.

Escobar, A. (1996). Constructing nature: elements for a post-structural political ecology. En R. Peet y M. Watts (eds.). *Liberation ecologies: environment, development, social movements* (46-68). Routledge.

Escobar, A. (1999). After nature: Steps to an anti-essentialist political ecology. Current Anthropology, 40(1), 1–30. https://doi.org/10.1086/515799

Fairhead, J. y M. Leach. (1996). *Misreading the African landscape: society and ecology in a forest-savanna mosaic*. Cambridge University Press.

Folke, C., F. Berkes y J. Colding. (1998). Ecological practices and social mechanisms for building resilience and sustainability. En F. Berkes y C. Folke (eds.). *Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience* (414-436). Cambridge University Press.

Forsyth, T. (1998). Mountain myths revisited: integrating natural and social environmental science. *Mountain Research and Development*, *18*, 107-116.

Funtowicz, S. y J. Ravetz. (1994). Emergent complex systems. *Futures*, *26*, 568-582.

Gandy, M. (1996). Crumbling land: the postmodernity debate and the analysis of environmental problems. *Progress in Human Geography*, *20*, 23-40.

Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: the processes of ecological change in Indonesia.* University of California Press.

Gibson, C., E. Ostrom y T.-K. Ahn. (1998). *Scaling issues in the social sciences.* International Human Dimensions Programme Working Paper 1.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: outline of a theory of structuration*. Polity Press.

Glacken, C. (1967). *Traces of the Rhodian shore: nature and culture in Western thought from ancient times to the end of the eighteenth century.* University of California Press.

Goodland, R. (1975). History of "ecology". *Science*, *188*, 313.

Greenberg, J. y T. Park. (1994). Political ecology. *Journal of Political Ecology*, *1*, 1-12.

Griffiths, T. y L. Robin (eds.). (1997). *Ecology and empire: environmental history of settler societies*. Keele University Press.

Grillo, R. y R. Stirrat (eds.). (1997). *Discourses of development: anthropological perspectives.* Berg.

Grove, R. (1995). *Green imperialism: colonial expansion, tropical island edens and the origins of environmentalism, 1600-1860*. Cambridge University Press.

Grove-White, R. (1993). Environmentalism: a new moral discourse for technological society? En K. Milton (ed.). *Environmentalism: the view from anthropology* (18-30). Routledge.

Gunderson, L., C. Holling y S. Light (eds.). (1995). *Barriers and bridges to the renewal of ecosystems and institutions*. Columbia University Press.

Hanna, S., C. Folke y K. Goran Maler (eds.). (1996). *Rights to nature: cultural, economic, political and ecological principles of institutions for the environment*. Island Press.

Hannigan, J. (1995). *Environmental sociology: a social constructionist perspective.* Routledge.

Haraway, D. (1991). *Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature.* Routledge.

Hardesty, D. (1986). Rethinking cultural adaptation. *Professional Geographer*, *38*, 11-18.

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, *162*, 1243-1248.

Harding, S. (1991). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives.* Open University Press.

Harris, M. (1979). *Cultural materialism: the struggle for a science of culture.* Random House.

Harrison, G. (1979). Stability under environmental stress: resistance, resilience, persistence and variability. *American Naturalist*, *1135*, 659-664.

Harvey, D. (1974). Population, resources and the ideology of science. *Economic Geography*, *50*, 256-277.

Harvey, D. (1993). The nature of environment: the dialectics of social and environmental change. *Social Register*, *1*, 1-51.

Hastings, A., C. L. Hom, S. Ellner, P. Turchin y H. C. J. Godfray. 1993. Chaos in ecology: is mother nature a strange attractor? *Annual Review of Ecology and Systematics*, *24*, 1-33.

Headland, T. (1997). Revisionism in ecological anthropology. *Current Anthropology*, *38*, 605-609.

Hecht, S. y A. Cockburn. (1990). *The fate of the forest.* Harper Collins.

Hilborn, R. y D. Gunderson. (1996). Chaos and paradigms for fisheries management. *Marine Policy*, *20*, 87-89.

Hilborn, R. y D. Ludwig. (1993). The limits of applied ecological research. *Ecological Applications*, *34*, 571-573.

Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *4*, 1-23.

Holling, C. S. (1978). *Adaptive environmental assessment and management.* Wiley.

Holling, C. S. (1986). The resilience of terrestrial ecosystems: local surprise and global change. En W. Clark y R. Munn (coords.). *Sustainable development of the biosphere* (292-317). Cambridge University Press.

Holling, C. S. (1993). Investing in research for sustainability. *Ecological Applications*, *34*, 552-555.

Holling, C. S. (1994). Simplifying the complex: the paradigms of ecological function and structure. *Futures*, *266*, 598-609.

Holling, C. S., F. Berkes y C. Folke. (1998). Science, sustainability and resource management. En F. Berkes y C. Folke (eds.). *Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience* (342-362). Cambridge University Press.

Holling CS, Schindler D, Walker B, Roughgarden J. 1995. Biodiversity in the functioning of ecosystems: an ecological synthesis. In Biodiversity Loss: Economic and Social Issues, ed. C Perrings, K-G Maler, C Folke, CS Holling, B-O Jansson, 44–83. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.

Homewood, K. y W. Rodgers. (1991). *Maasailand ecology: pastoralist development and wildlife conservation in Ngorongoro, Tanzania*. Cambridge University Press.

Hughes, T. (1994). Catastrophe, phase shifts and large-scale degradation of a Caribbean coral reef. *Science*, *226*, 1547-1549.

Hurley, A. (1995). *Environmental inequality: class, race and industrial pollution in Gary, Indiana*. University of North Carolina Press.

Ingold, T. (1990). An anthropologist looks at biology. *Man*, *25*, 208-229.

Ives, J. (1987). The theory of Himalayan environmental degradation: its validity and application challenged by recent research. *Mountain Research and Development*, *7*, 189-199.

Jackson, C. (1993). Women/nature or gender/history? A critique of ecofeminist "development". *Journal of Peasant Studies*, *20*, 389-419.

Jamison, A. (1996). The shaping of the global environmental agenda: the role of nongovernmental organizations. En S. Lash, B. Szerszynski y B. Wynne (eds.). *Risk, environment and modernity: towards a new ecology* (224-245). Sage.

Jasanoff, S. (1992). Science, politics and the renegotiation of expertise. *Osiris*, *7*, 1-23.

Kates, R. (1971). Natural hazard in human ecological perspective: hypothesis and models. *Economic Geography*, *47*, 438-451.

Knowlton, N. (1992). Thresholds and multiple stable states in coral reef community dynamics. *American Zoologist*, *32*, 674-682.

Larkin, P. (1977). An epitaph for the concept of maximum sustainable yield. *Transactions of the American Fisheries Society*, *106*, 1-11.

Lash, S., B. Szerszynski y B. Wynne (eds.). (1996). *Risk, environment and modernity: towards a new ecology*. Sage.

Latour, B. (1987). *Science in action: how to follow scientists and engineers through society*. Harvard University Press.

Latour, B. (1993). *We have never been moderm*. Harvard University Press.

Leach, M. (1994). *Rainforest relations: gender and resource use among the Mende of Gola, Sierra Leone*. Edinburgh University Press.

Leach, M. y C. Green. (1997). Gender and environmental history: from representation of women and nature to gender analysis of ecology and politics. *Environmental History*, *3*, 343-370.

Leach, M., R. Mearns e I. Scoones (eds.). (1996). *The lie of the land: challenging received wisdom on the African environment*. Currey.

Leach, M., Mearns, R. and Scoones, I. (1999) Environmental Entitlements: Dynamics and Institutions in Community-Based Natural Resources Management. World Development, 27, 225. http://dx.doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00141-7

Lee, K. (1993). *Compass and gyroscope: integrating science and politics for the environment*. Island.

Lee, R. (1972). !Kung spatial organization: an ecological and historical perspective. *Human Ecology*, *1*, 125-147.

Lees, S. H. y D. G. Bates. (1990). The ecology of cumulative change. En A. Markandya y J. Richardson (eds.). *The Earthscan reader in environmental economics* (247-277). Earthscan.

Levins, R. y R. Lewontin. (1985). Dialectics and reductionism in biology. En R. Levins y R. Lewontin (eds.). *The dialectical biologist* (277–289). Harvard University Press.

Little, P. (1994). The social context of land degradation 'desertification' in dry regions" En L. Arizpe, P. Stone y D. Major (eds.). *Population and environment: rethinking the debate* (209-251). Westview.

Long, N. y A. Long (eds.). (1992). *Battlefields of knowledge: the interlocking of theory and practice in social science research and development*. Routledge.

Ludwig, D., R. Hilborn y C. walters. (1993). Uncertainty, resource exploitation and conservation: lessons from history. *Science*, *260*, 17-36.

MacArthur, R. y E. Wilson. (1967). *The theory of island biogeography*. Princeton University Press.

Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-sited ethnography. *Annual Review of Anthropology*, *24*, 95-117.

Markandya, A. y J. Richardson (eds.). (1992). *The Earthscan reader in environmental economics*. Earthscan.

Marsh, G. P. 1965. *Man and nature, or, physical geography as modified by human action*. Belknap. [Original de 1864].

May, R. (1977). Thresholds and breakpoints in ecosystems with a multiplicity of stable states. *Nature*, *269*, 471-477.

May, R. (1986). When two and two do not make four: nonlinear phenomena in ecology. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B*, *228*, 241-266.

May, R. (1989). The chaotic rhythms of life. *New Scientist*, *124*, 37-41.

McCann, J. (1995). *People of the plow: an agricultural history of Ethiopia, 1880-1990*. University of Wisconsin Press.

McIntosh, R. (1985). *The background of ecology: concept and theory*. Cambridge University Press.

McIntosh, R. P. (1987). Pluralism in ecology. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *18*, 321-341.

McNaghten, P. y J. Urry. (1995). Towards a sociology of nature. *Sociology*, *29*, 203-220.

McNaghten, P. y J. Urry. (1998). *Contested natures*. Sage.

Mehta, L. (1998). Social difference and water resources management: insights from Kutch, India. *IDS Bulletin*, *28*, 79-89.

Merchant, C. (1989). *Ecological revolutions: nature, gender and science in New England*. University of North Carolina Press.

Mies, M. y V. Shiva. (1993). *Ecofeminism*. Zed Books.

Milton, K. (1993). Introduction: environmentalism and anthropology. En K. Milton (ed.). *Environmentalism and anthropology* (1-30). Routledge.

Milton, K. (1997). Ecologies: anthropology, culture and the environment. *International Social Science Journal*, *154*: 477-495.

Moore, D. (1996). Marxism, culture and political ecology: environmental struggles in Zimbabwe's eastern highlands. En P. Peet y M. Watts (eds.). *Political ecology: a critical introduction* (125-147). Routledge.

Moore, H. y M. Vaughan. (1994). *Cutting down trees: gender, nutrition and agricultural change in the Northern Province of Zambia, 1890-1990*. Currey.

Moran, E. (ed.). (1990). *Ecosystem ecology in biology and anthropology: a critical assessment*. University of Michigan Press.

Mortimore, M. (1998). *Roots in the African dust: sustaining the Sub-Saharan drylands*. Cambridge University Press.

Mosse, D. (1997). The symbolic making of a common property resource: history, ecology and locality in a tank-irrigated landscape in South India. *Development and Change*, *28*, 467-504.

Netting, R. (1968). *Hill farmers of Nigeria: cultural ecology of the Kofyar of the Jos Plateau*. University of Washington Press.

Netting, R. (1993). *Smallholders, householders: farm families and the ecology of intensive sustainable agriculture*. Stanford University Press.

Neumann, R. (1995). Ways of seeing Africa: colonial recasting of African society and landscape in Serengeti National Park. *Ecumene*, *2*, 149-169.

Norgaard, R. (1994). *Progress betrayed: the demise of development and a co-evolutionary revisioning of the future*. Routledge.

Noy-Meir, I. (1973). Desert ecosystems: environment and producers. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *4*, 25-51.

Nyerges, A. E. (ed.). (1997). *The ecology of practice*. Gordon & Breach.

O'Connor, J. (1997). What is environmental history? Why environmental history? *Capitalism, Nature, Socialism*, *8*, 3-29.

Odum, E. (1953). *Fundamentals of ecology*. Saunders.

Orlove, B. S. (1980). Ecological anthropology. *Annual Review of Anthropology*, *9*, 235-273.

Ortner, S. B. (1984). Theory in anthropology since the sixties. *Comparative Studies in Society and History*, *26*, 126-166.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Padoch, C. y N. Peluso. (1996). *Borneo in transition: people, forests, conservation and development*. Oxford University Press.

Palsson, G. (1996). Human-environmental relations: orientalism, paternalism and communalism. En P. Descola y G. Pálsson (eds.). *Nature and society: anthropological perspectives* (63-81). Routledge.

Peet, R. y M. Watts (eds.). (1996). *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge.

Peluso, N. (1994). *Rich forests, poor people: resource control and resistance in Java*. University of California Press.

Peters, P. (1994). *Dividing the commons: politics, policy and culture in Botswana*. University Press of Virginia.

Pickett, S. y P. White (eds.). (1985). *The ecology of natural disturbance and patch dynamics*. Academic Press.

Pimm, S. (1991). *The balance of nature? Ecological issues in the conservation of species and communities*. University of Chicago Press.

Porritt, J. y D. Winner. (1988). *The coming of the greens*. Fontana.

Price, M. y M. Lewis. (1993). The reinvention of traditional cultural geography. *Annals of the American Association of Geographers*, *83*, 1-7.

Price, M. y M. Thompson. (1997). The complex life: human land uses in mountain ecosystems. *Global Ecology and Biogeography Letters*, *6*, 77-90.

Rangan, H. (1995). Contested boundaries: state policies, forest classifications and deforestation in the Garhwal Himalayas. *Antipode*, *27*, 343-362.

Rappaport, R. (1967). *Pigs for the ancestors: ritual in the ecology of a New Guinea people*. Yale University Press.

Rappaport, R. A. (1971). The flow of energy in an agricultural society. *Scientific American*, *224*, 116-133.

Redclift, M. (1987). *Sustainable development: exploring the contradictions*. Methuen.

Redclift, M. (1992). Sustainable development and global environmental change: implications of a changing agenda. *Global Environmental Change*, *2*, 32–42.

Redclift, M. y T. Benton. (eds.). (1994). *Social theory and global environmental change*. Routledge.

Redclift, M. y G. Woodgate. (1994). Sociology and the environment: discordant discourse? En M. Redclift y T. Benton (eds.). *Social theory and global environmental change* (pp. 51-66). Routledge.

Richards, P. (1985). *Indigenous agricultural revolution: ecology and food production in West Africa*. Hutchinson.

Richards, P. (1986). *Coping with hunger: hazard and experiment in an African rice-farming system*. Allen & Unwin.

Richards, P. (1989). Agriculture as a performance. En R. Chambers, A. Pacey y L.-A. Thrupp (eds.). *Farmer first: farmer innovation and agricultural research* (pp. 39-42). Intermediate Technology.

Robbins, P. (1998a). Paper forests: imagining and deploying exogenous ecologies in arid India. *Geoforum*, *29*, 69-86.

Robbins, P. (1998b). Authority and environment: institutional landscapes in Rajasthan, India. *Annals of the Association of American Geographers*, *88*, 410-435.

Robertson, G., M. Mash, L. Tickner, J. Bird, B. Curtis y T. Putnam (eds.). (1996). *Future natural: nature/science/culture*. Routledge.

Rocheleau, D. (1995). Maps, numbers, text, and context: mixing methods in feminist political ecology. *Professional Geographer*, *47*, 458-466.

Rocheleau, D. y L. Ross. (1995). Trees as tools, trees as text: struggles over resources in Zambrana-Chaucuey, Dominican Republic. *Antipode*, *27*, 407-428.

Rocheleau, D., L. Ross y J. Morrobel. (1997). Forests, trees, and fields of power: makings and takings of biodiversity in the regional agroforest of Zambrana-Chacuey, Dominican Republic [presentación en *Agricultural Studies Seminar*, ferbrero, Yale University, New Haven].

Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter y E. Wangari (eds.). (1996). *Feminist political ecology: global issues and local experiences*. Routledge.

Rochlin, G. (1996). Reliable organizations: present research and future directions. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, *4*, 55-59.

Roe, E. (1991). "Development narratives" or making the best of blueprint development. *World Development*, *19*, 287-300.

Roe, E., L. Hutsinger y K. Labnow. (1998). High reliability pastoralism. *Journal of Arid Environments*, *39*, 39-55.

Rowntree, L. (1996). The cultural landscape concept in American human geography. En C. Earle, K. Mathewson y M. Kenzer (eds.). *Geography and modernity* (127-160). Rowman and Littlefield Publishers.

Sahlins, M. (1957). Land use and the extended family of Moala, Fiji. *American Anthropologist*, *59*, 449-462.

Sayer, A. (1993). Postmodernist thought in geography: a realist view. *Antipode*, *25*, 320-344.

Schama, S. (1995). *Landscape and memory*. Knopf.

Schroeder, R. (1995). Contradictions along the commodity road to environmental stabilization: foresting Gambian gardens. *Antipode*, *27*, 325-342.

Schroeder, R. (1997). "Re-claiming" land in the Gambia: gendered property rights and environmental intervention. *Annals of the American Association of Geographers*, *87*, 487-508.

Schroeder, R. y R. Neumann. (1995). Manifest ecological destinies: local rights and global environmental agendas. *Antipode*, *27*, 321-324.

Scoones, I. (ed.). (1995). *Living with uncertainty: new directions in pastoral development in Africa*. Intermediate Technology.

Scoones, I. (1997). Landscapes, fields and soils: understanding the history of soil fertility management in Southern Zimbabwe. *Journal of Southern African Studies*, *23*, 615-634.

Scott, J. (1998). *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Sillitoe, P. (1996). *A place against time: land and environment in the Papua New Guinea Highlands*. Harwood Academic.

Sillitoe, P. (1998). The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. *Current Anthropology*, *39*, 223-252.

Silver, T. (1990). *A new face on the countryside: Indians, colonists and slaves in the South Atlantic forests, 1500-1800*. Cambridge University Press.

Simmons, I. G. (1993). *Interpreting nature: cultural constructions of the environment*. Routledge.

Sivaramakrishnan, K. (1996). Co-management as science and democracy: a view from West Bengal [ponencia en *Science, Development, and Democracy Conference*, Department of Science and Technology Studies, Cornell University, noviembre].

Sivaramakrishnan, K. (1999). *Modern forests: state-making and environmental change in colonial Eastern India*. Stanford University Press.

Smith, N. (1996). The production of nature. En G. Roberson, M. Mash, L. Tickner, J. Bird, B. Curtis y T. Putnam (eds.). *Future natural: nature/science/culture* (35-54). Routledge.

Soper, K. (1996). Nature/nature. En G. Roberson, M. Mash, L. Tickner, J. Bird, B. Curtis, T. Putnam (eds.). *Future natural: nature/science/culture* (pp. 22-34). Routledge.

Sprugel, D. (1991). Disturbance, equilibrium and environmental variability: what is 'natural' vegetation in a changing environment? *Biological Conservation*, *58*, 1-18.

Steward, J. (1955). *Theory of culture change: the methodology of multilinear evolution*. University of Illinois Press.

Stoddart, D. (1965). Geography and the ecological approach: the ecosystem as a geographic principle and method. *Geography*, *50*, 242-251.

Stoddart, D. (1987). To claim the high ground: geography for the end of the century. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *13*, 336.

Stone, G. (1996). *Settlement ecology: the social and spatial organization of Kofyar agriculture*. University of Arizona Press.

Sullivan, S. (1996). Towards a non-equilibrium ecology: perspectives from an arid land. *Journal of Biogeography*, *23*, 1-5.

Szerszynski, B. (1996). On knowing what to do: environmentalism and the modern problematic. En L. Lash, B. Szerszynski y B. Wynne (eds.). *Environmentalism: a reader* (104-138). Sage Publications.

Taylor, P. y F. Buttel. (1992). How do we know we have global environmental problems? Science and the globalization of environmental discourse. *Geoforum*, *23*, 405-416.

Tiffen, M., M. Mortimore y F. Gichuki. (1994). *More people, less erosion: environmental recovery in Kenya*. Wiley.

Turner, M. G. (1989). Landscape ecology: the effect of pattern on process. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *20*, 171-197.

Vayda, A. (1983). Progressive contextualization: methods for research in human ecology. *Human Ecology*, *11*, 265-281.

Vayda, A. P. y B. J. McCay. (1975). New directions in ecology and ecological anthropology. *Annual Review of Anthropology*, *4*, 293-306.

Walker, B. (1993). Rangeland ecology: understanding and managing change. *Ambio*, *22*, 80-87.

Walters, C. (1976). *Adaptive management of renewable resources*. McGraw-Hill.

Warren, A. (1995). Changing understandings of African pastoralism and the nature of environmental paradigms. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *20*, 193-203.

Warren, D., L. Slikkerveer y D. Brokensha (eds.). (1995). *The cultural dimension of development: indigenous knowledge systems*. Intermediate Technology.

Watts, M. (1983). On the poverty of theory: natural hazards research in context. En K. Hewitt (ed.). *Interpretations of calamity* (231-262). Allen & Unwin.

Westoby, M., B. Walker e I. Noy-Meir. (1989)."Opportunistic management for rangelands not at equilibrium. *Journal of Range Management*, *42*, 266-274.

White, R. (1990). Environmental history, ecology and meaning. *Journal of American History*, *76*, 11-14.

Wiens, J. A. (1976). Population responses to patchy environments. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *7*, 81-120.

Williams, M. (1994). The relations of environmental history and historical geography. *Journal of Historical Geography*, *20*, 3-21.

Williams, R. (1980). *Problems of materialism and culture*. Verso.

Wilson, J., R. Townsend, P. Kelban, S. McKay y J. French. (1990). Managing unpredictable resources: traditional policies applied to chaotic populations. *Ocean and Shoreline Management*, *13*, 179-197.

Wilson, K. (1995). "Water used to be scattered in the landscape': local understandings of soil erosion and land-use planning in Southern Zimbabwe. *Environmental History*, *1*, 281-296.

Wolf, E. (1972). Ownership and political ecology. *Anthropological Quarterly*, *45*, 201-205.

Woodgate, G. y M. Redclift. (1998). From a "sociology of nature" to environmental sociology: beyond social construction. *Environmental Values*, *7*, 3-24.

Worster, D. (1977). *Nature's economy: a history of ecological ideas*. Cambridge University Press.

Worster, D. (1979). *Dustbowl: the Southern Plains in the 1930s*. Oxford University Press.

Worster, D. (1984). History as natural history: an essay on theory and method. *Pacific Historical Review*, *53*, 1-6.

Worster, D. (1985). *Rivers of empire: water, aridity and the growth of the American West*. Pantheon.

Worster, D. (1993a). *The wealth of nature: environmental history and the ecological imagination*. Oxford University Press.

Worster, D. (1993b). The shaky ground of sustainability. En W. Sachs (ed.). *Global ecology: a new arena of political conflict* (132-145). Zed Books.

Wright, S. (ed.). (1994). *Anthropology of organizations*. Routledge.

Wynne, B. (1994). Scientific knowledge and the global environment. En M. Redclift y T. Benton (eds.). *Social theory and global environmental change* (pp. 169-189). Routledge.

Wynne, B. (1996). May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay knowledge divide. En L. Lash, B. Szerszynski y B. Wynne (eds.). *Modernity and environment: the reconfiguration of social theory* (44-83). Sage Publications.

Yearley, S. (1994). Social movements and environmental change. En M. Redclift y T. Benton (eds.). *Social theory and global environmental change* (pp. 150-168). Routledge.

Zimmerer, K. (1994). Human geography and the "new ecology": the prospect and promise of integration. *Annals of the American Association of Geographers*, *84*, 108-125.

Zimmerer, K. (1996a). Ecology as cornerstone and chimera in human geography. En C. Earle, M. Mathewson y M. S. Kenzer (eds.). *Concepts in human geography* (161-188). Routledge.

Zimmerer, K. (1996b). *Changing fortunes: biodiversity and peasant livelihoods in the Peruvian Andes*. University of California Press.

23. Hacia una ecología política urbana de justicia energética: el caso de la energía solar de azotea en Tucsa, Arizona*[1]

Remington Franklin y Tracey Osborne

Introducción

El precio de la luz lo fijan las compañías eléctricas mediante procesos ordinarios que suelen ser desconocidos por gran parte de la población consumidora. Cada dos a cinco años, aproximadamente, las empresas que dominan el mercado (empresas monopolio) organizan subastas eléctricas (mecanismos de ajustes de los gastos de servicio, las tarifas que pagan los consumidores) en las que se proponen nuevos precios y se solicita la aprobación de los reguladores estatales. Por lo general, los trámites para fijar las nuevas tarifas duran más de un año y llevan consigo audiencias

---

1 Publicado originalmente en: Remington Franklin y Tracey Osbourne, 2017, "Toward an urban political ecology of energy justice: the case of rooftop solar in Tucson, AZ", *Journal of Political Ecology*, *24*, 1056.

Remington Franklin, MA, y Dra. Tracey Osborne, profesora asistente, Escuela de Geografía y Desarrollo, Universidad de Arizona, Tucson, Arizona, EE. UU. Correos electrónicos: remysfranklin@gmail.com y tosborne@email.arizona.edu. La investigación de Franklin gira en torno a las políticas de transición de energía renovable y justicia social en el contexto de cómo mitigar el cambio climático. Osborne estudia la mercantilización de la naturaleza en los mercados ambientales. Este artículo representa el esfuerzo colectivo de una comunidad de práctica preocupada por la justicia energética y la ecología política urbana de la energía solar de azotea en Tucson, Arizona. Estamos inmensamente agradecidos a los participantes de la investigación que compartieron con nosotros sus conocimientos y opiniones, así como por su constante compromiso para crear un sistema de electricidad más justo en el sur de Arizona. Damos las gracias a Miriam Gay-Antaki y Sarah Launius por revisar una y otra vez las primeras versiones de este artículo, y por sus críticas constructivas. Nuestro agradecimiento va también para los organizadores y asistentes de la sesión de la Asociación Estadounidense de Geógrafos sobre "Geografías críticas de la infraestructura energética", en la que se presentó por primera vez la versión final de esta investigación.

*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

judiciales e interminables debates cargados de abundante jerga técnica y legal. La falta de claridad que rodea tales procedimientos impide que la mayoría de la población estadounidense no sea consciente de las consecuencias directas que tienen en el precio de la electricidad.

Este artículo se centra en los debates sobre qué estructura de tarifas es la mejor en la generación de una red de electricidad descentralizada (GD) de paneles solares fotovoltaicos (FV) en las casas ("energía solar de azotea"). Se toma como referencia la subasta de tarifas de la compañía eléctrica del sur de Arizona, Tucson Electric Power (TEP), que tuvo lugar en septiembre de 2015; un ejemplo de la complejidad política que rodea a la transición de energía renovable en muchas ciudades estadounidenses. La preocupación por el cambio climático ha propiciado que la energía solar se presente como una importante alternativa para generar electricidad descarbonizada, la cual es responsable de 29% de las emisiones de dióxido de carbono en EE. UU. y 68% de las emisiones en el condado Pima, donde opera TEP (Cotty, 2015; EPA, 2017). Sin embargo, ni existe aún consenso sobre qué escala es la mejor para medir la energía fotovoltaica (plantas de electricidad centralizada o pequeños sistemas descentralizados), ni hay acuerdo sobre los efectos socioeconómicos que tiene la electricidad solar en los hogares de bajos ingresos.

Las geografías de infraestructura solar y sus repercusiones en los hogares consumidores de energía eléctrica se deciden por medio de procesos muy politizados que no han sido suficientemente estudiados desde el ámbito científico. El punto más alto de estos procesos tuvo lugar en 2016, cuando 47 estados y la capital de EE. UU. llevaron a cabo 212 acciones políticas relacionadas con la medición neta, el diseño de tarifas y la propiedad solar (Proudlove *et al*., 2017). Con diferencia, el estado que más medidas adoptó ese año fue Arizona; sus tres empresas monopolio solicitaron cambios en el diseño de las tarifas de la energía solar que fueron llevados ante los reguladores estatales, la Arizona Corporation Commission (ACC).

Partiendo del caso de la subasta de TEP como un ejemplo representativo, el artículo se pregunta: ¿cuáles son los efectos de la energía solar de

azotea para la justicia energética? El debate da comienzo con la declaración de justicia distributiva que hacen TEP y otras empresas monopolio: los costos de la energía solar de azotea se desplazan de los dueños solares a los clientes de bajos ingresos que no pueden permitírsela. TEP utilizó este argumento del desplazamiento de costos para justificar las nuevas estructuras de tarifas que perciben más ingresos de sus clientes. Estos cambios giran en torno a un mecanismo de facturación llamado medición neta minorista (MNM), el cual permite que a la clientela que la genera *in situ* en sus casas se le cobre solo el consumo neto mensual, lo cual se calcula restando a la electricidad que se recibe de la compañía eléctrica la suministrada a la red eléctrica (Lazar, 2016). Aunque sigan dependiendo de la red para intercambiar electricidad a lo largo del día, la MNM permite a los propietarios de energía solar de azotea compensar la mayor parte de la factura eléctrica. La empresa afirma que sus clientes "no pagan la parte que les corresponde de los gastos fijos mínimos de gestión y mantenimiento de la red eléctrica de TEP a la que están conectados", por lo que exige tarifas más altas para todos los consumidores. Se asume que estos tienen menos ingresos que los dueños solares, ya que o no son propietarios de su vivienda o no tienen suficiente capital o crédito como para invertir en una instalación solar (TEP, 2015). En suma, TEP alega que la energía solar de azotea con MNM crea un subsidio cruzado regresivo que puede agudizar la pobreza energética.[2]

Tras una decisión tomada por la ACC en diciembre de 2016, Arizona se convirtió en uno de los primeros estados en reemplazar la MNM por una tarifa de valor de energía solar (VES) que asegura kilovatios-hora solares de GD a una tarifa reducida, basada en el método de costos

2 "Pobreza energética" por lo general hace referencia a los hogares que gastan más del diez por ciento de sus ingresos en los servicios de electricidad mínimos para satisfacer las necesidades básicas. Se trata de un concepto que se utiliza sobre todo en el contexto del Norte global, pero que está creciendo en muchos otros países debido al incremento de los precios del combustible y de la disminución del poder adquisitivo de los hogares (Sovacool *et al*., 2014). En este artículo no hacemos un análisis específico de la escasez de combustible, sino utilizamos el concepto como clave de la preocupación generalizada sobre cómo el aumento de las tarifas eléctricas puede afectar de manera desproporcionada a la clientela de bajos ingresos de las compañías eléctricas, que puede verse afectada por estrés económico y una menor calidad de vida.

evitados (Jibilian 2017; Pitt y Michaud, 2015). Asimismo, los reguladores estatales aprobaron la solicitud de TEP de añadir cargos que incentiven a los consumidores a elegir mecanismos de facturación variables en el tiempo, aunque a un nivel significativamente inferior a la propuesta inicial de la compañía. En conjunto, estos cambios en las tarifas aumentaron en 8.50 dólares estadounidenses la factura mensual promedio de los clientes particulares de la empresa y alargaron el plazo de devolución entre las nuevas instalaciones de energía solar de azotea en el territorio donde opera TEP (Rodda, 2017).

Si bien el argumento del desplazamiento de costos de TEP fue clave a la hora de justificar las tarifas propuestas ante los reguladores estatales, este fue muy criticado por los defensores de la energía solar, un colectivo que abarca desde los representantes y empleados de las compañías de instalaciones solares, hasta clientes, ecologistas, abogados especialistas en el ámbito de la energía o representantes de la comunidad. En términos generales, se explicó que la energía solar de azotea aporta beneficios a largo plazo a toda la ciudadanía porque atenúa el daño ambiental y evita la necesidad de nuevas y costosas infraestructuras de red eléctrica. A los consumidores debería cobrársele en función de la energía que producen. También se puso de manifiesto que la propuesta de la compañía eléctrica de incrementar los gastos fijos mensuales entorpecería el despliegue de la energía solar y perjudicaría de manera muy desigual a los clientes de bajos ingresos; y se dio una interpretación diferente de justicia competitiva, entendiéndose como un proceso justo que también reconoce los valores ambientales y sociales.

Desde la perspectiva de la ecología política urbana (EPU), este artículo analiza las narrativas antagónicas de justicia y explica por qué en la subasta eléctrica de TEP las peticiones de la compañía se aprobaron al final. Construimos la explicación a partir de la codificación inductiva de datos cualitativos (incluyendo trece entrevistas semiestructuradas a empleados de la compañía, representantes del Gobierno local y defensores de la energía solar de azotea); observación participante en cuatro sesiones públicas de la subasta, así como en reuniones de planificación relacionadas, protestas y eventos de la comunidad; análisis de testimonios, informes y

discursos archivados en el expediente de la subasta que lleva la ACC, y discursos de clientes recogidos en sesiones políticas.

En el siguiente apartado, relacionamos el caso de estudio con la literatura existente sobre justicia energética, y explicamos cómo se le analiza desde la EPU. Si bien hay investigaciones que estudian los efectos que tiene la energía solar de azotea en la distribución de costos por medio de tarifas, nos centramos en la economía política, las relaciones de poder y la configuración material de la red energética, lo cual ayuda a profundizar en el análisis de la (in)justicia procedimental y de reconocimiento. En el tercer apartado empezamos presentando el contexto histórico y situacional de la subasta de TEP, para después abordar los debates sobre la energía solar de azotea relacionados con los tres tipos de justicia: distributiva, procedimental y de reconocimiento. Teniendo como marco teórico la EPU, en los apartados cuarto a sexto argumentamos por qué el desplazamiento de costos constituye una narrativa estratégica que, en vez de favorecer la justicia competitiva, lo que hace es condicionar la toma de decisiones. A nuestro modo de ver, la subasta eléctrica de TEP se trata de un proceso injusto, en parte porque la normativa sobre la "tasa de devolución" se articula de forma que prioriza de manera muy desigual el valor de los inversores. Sin embargo, las particulares propiedades materiales de los paneles solares podrían mejorar la justicia procedimental y de reconocimiento con una mayor participación pública en la gobernanza de la electricidad.

Mediante el análisis de la subasta de TEP, este artículo hace tres aportaciones. En primer lugar, al tener en cuenta la justicia procedimental y de reconocimiento, ofrecemos una comprensión más profunda de las implicaciones que tiene la energía solar de azotea para la justicia energética. Para ello, desde el enfoque de la EPU ponemos en diálogo las teorías de justicia energética con el análisis de los discursos que hemos recogido. En segundo lugar, esperamos recalcar lo importante que es la regulación de las compañías eléctricas y de los paneles solares en las casas como espacios de debate sobre el futuro de la energía alternativa. Estos temas no han recibido la suficiente atención por parte de los científicos que adoptan la EPU y que estudian la justicia energética, y son escenarios clave por medio de los cuales se revisan activamente las geografías de la

red eléctrica. Por último, nos gustaría demostrar que la EPU constituye una perspectiva útil para analizar la justicia energética; en concreto, al entender la injusticia procedimental y de reconocimiento como productos sistémicos de la regulación de la tasa de rentabilidad y la configuración material de la red eléctrica.

Hacia una ecología política urbana de justicia energética

Una reseña publicada recientemente resume la justicia energética como la aplicación de los principios de justicia a la "política energética, producción y sistemas energéticos, consumo energético, activismo energético, seguridad energética, trinomio energético, economía política de la energía y el cambio climático" (Jenkins *et al*., 2016: 175). Entendida en sentido amplio, la justicia energética abarca temas de interés que han sido abordados en publicaciones sobre justicia ambiental (Schlosberg, 2004, 2013; Walker, 2009), justicia climática (Barrett, 2013; Burnham *et al*., 2013; Forsyth, 2014; Bond, 2015), pobreza energética (Walker, 2008; Sovacool *et al*., 2014), geografía de la energía (Brigde *et al*., 2013; Calvert, 2015; Huber, 2015) y ecologías políticas del cambio climático (Tschakert, 2012; Liverman, 2015). Sovacool y Dworkin (2015: 441) se refieren a ello de la siguiente manera:

> Definimos un mundo energéticamente justo como aquel que distribuye equitativamente tanto los beneficios como los costos asociados a la producción y al consumo de servicios energéticos, así como el que trata de manera igualitaria a las personas y a las comunidades a la hora de tomar decisiones relacionadas con la energía.

Esta definición incorpora aspectos importantes del concepto de justicia energética que tenemos en cuenta en este artículo. Por medio de su consumo y producción, la energía acarrea beneficios y costos, y la justicia no solo requiere una distribución justa de ellos, sino también justicia en los procesos de toma de decisiones que determinan esa distribución. Dicha definición lleva implícita la crucial, pero a menudo ignorada pregunta sobre qué personas o valores están siendo reconocidos al evaluar la justicia como distribución y proceso (Young, 1990; Fraser, 1997; Schlosberg, 2004).

Así pues, nos permitimos hacer una distinción analítica entre tres tipos de justicia: distributiva, procedimental y de reconocimiento (Tabla 1). Esta perspectiva emplea teorías de justicia fundacional desarrolladas por filósofos como Rawls (1971), Young (1990), Fraser (1997) y Fainstein (2010), y más recientemente aplicadas a la energía (Bickerstaff *et al*., 2013; McCauley *et al*., 2013; Fuller y McCauley, 2016; Jenkins *et al*., 2016; Sovacool y Dworkin, 2015; Sovacool *et al*., 2014). Esta conceptualización trivalente resulta útil tanto para evaluar la (in)justicia energética como para explorar cuestiones normativas (Jenkins *et al*., 2016):

—¿Cómo deberíamos redistribuir los costos/beneficios?

—¿Qué procesos alcanzan resultados más justos?

—¿A quién deberíamos tener en cuenta y cómo?

Tabla 1. Tres tipos de justicia energética

Tipo	Definición positiva	Elaboración
Distributiva	Distribución justa de bienes y prejuicios sociales relacionados con la producción y el consumo de la energía.	¿Cuáles son los bienes distribuidos? ¿Entre qué entidades? ¿Cuál es el método apropiado de distribución (p. ej. necesidad, mérito, utilidad, privilegio, derecho de propiedad)? (Sovacool y Dworkin, 2015).
Procedimental	Acceso justo a la participación en los procesos de toma de decisiones que gobiernan la distribución.	Tres mecanismos de inclusión para conseguir resultados: movilización del conocimiento local, mejor acceso a la información, mejor representación institucional (Jenkins *et al*., 2016).
De reconocimiento	Representación justa, igualdad de derechos políticos y la seguridad de que no se van a recibir amenazas físicas.	¿Quién y qué clase de conocimiento se reconoce en el proceso? ¿Cuáles son las condiciones sociales, culturales, simbólicas e institucionales que subyacen a una distribución pobre? Tres principales categorías de la falta de reconocimiento: dominación cultural, no reconocimiento y falta de respeto (Fraser, 1997; Schlosberg, 2004).

Hasta ahora, la investigación en energía solar de azotea se ha venido centrando en aspectos relacionados con la justicia distributiva. Llama la

atención que desde las ciencias sociales no se hayan abordado aún las cuestiones de justicia que tienen que ver con la generación descentralizada. Por ejemplo, los análisis económicos, políticos y técnicos se limitan a analizar cómo se distribuyen mediante las tarifas los costos de electricidad de la energía solar de azotea y la justicia (Darghouth *et al*., 2016; Eid *et al*., 2014; Procter, 2014; Pitt y Michaud, 2015; Yamamoto, 2012). Lo contrario ocurre con la ciencia social crítica, que se aproxima más minuciosamente a la justicia, pero que apenas ha analizado la GD. Solo se alude brevemente a la energía solar de azotea en un volumen editado sobre justicia energética y transición hacia niveles reducidos de carbono (Bickerstaff *et al*., 2013), donde los autores citan informes que sugieren que el sistema de tarifas reguladas podría agravar la pobreza energética en Reino Unido (Stockton y Campbell, 2011; Preston *et al*., 2013). Walker (2008) ofrece una reseña de vínculos entre la GD y la pobreza energética, y advierte que un modelo de desarrollo centrado en el individuo que paga e instala dichas tecnologías podría conducir a que los hogares con rentas más bajas se conviertan aún más en una clase baja energética. Sin embargo, la GD también podría solucionar la pobreza energética si los Gobiernos locales, las asociaciones de la vivienda y los suministradores de energía proporcionaran activamente alternativas de las que se pudieran beneficiar los hogares de bajos ingresos. Aunque no se apoya en investigaciones empíricas, Walker (2008) hace una aportación muy valiosa al señalar que las consecuencias de la justicia de la energía solar de azotea se supeditan a la existencia o ausencia de programas que apoyen la participación de la población con rentas más bajas.

Oppenheim (2016) también hace una contribución significativa con su debate sobre cuál es la mejor manera de conseguir que la regulación de las empresas en Estados Unidos reduzca las emisiones de carbono y la pobreza energética. No obstante, este autor da por sentado el argumento del desplazamiento de costos y afirma que la GD solar amenaza con aumentar la pobreza energética si se reducen las ventas de las empresas, pero no los costos fijos; de hecho, esto solo contribuiría a aumentar las facturas de los hogares de rentas más bajas que no pueden permitirse invertir en paneles solares. El problema reside en que las actuaciones que se llevan

a cabo hasta ahora solamente se centran en las implicaciones distributivas que tiene la energía solar de azotea en la pobreza energética. Pese a que se trata de una cuestión importante, no aporta información ni sobre la justicia procedimental y de reconocimiento, ni sobre los reclamos de justicia competitiva presentados por los defensores de la energía solar de azotea en la subasta de TEP.

Por lo general, los estudios sobre los paneles solares no tienen en cuenta el papel que juegan el poder político y económico en la configuración de las reivindicaciones de justicia energética. Este artículo presenta datos empíricos desde la perspectiva de la ecología política urbana que ayudan a llenar ese vacío de conocimiento. Siguiendo la tradición de las geografías radicales histórico-materialistas, desde la EPU se desvelan los procesos que causan desigualdad en los entornos urbanos (Swyngedouw y Heynen, 2003). Estos son producidos por formas capitalistas históricamente específicas de la organización social del metabolismo de la naturaleza. Se utiliza el concepto de metabolismo como metáfora de un enfoque relacional sobre urbanización que entiende que los procesos urbanos están globalmente conectados a través de enormes redes de flujos sociomateriales que incorporan actores humanos e inhumanos, desde el capital hasta el cableado, los electrones y la comunicación de la política energética (Heynen *et al*., 2006; Silver, 2016). La EPU nos invita a rastrear estos flujos con el objetivo de establecer conexiones entre la economía política global y el cambio urbano.

Los investigadores que utilizan el enfoque de la EPU a menudo toman la infraestructura urbana como punto de partida en sus análisis, reconociendo que las redes de infraestructuras actúan como conductos y lugares para procesos de transformación socio natural (Heynen *et al*., 2006). La EPU entiende la red eléctrica urbana como una entidad socio natural producida que, al permitir otros flujos metabólicos, juega un papel fundamental en la conformación y mediación de la urbanización. Esta perspectiva revela cómo las geografías de la red eléctrica reflejan y refuerzan la manera en que está configurado el poder político (Silver, 2016). Utilizar la infraestructura material como punto de partida nos permite considerar las implicaciones de las distintas configuraciones de la red para la (re)producción de la desigualdad en las ciudades.

Como perspectiva analítica y epistemológica, la EPU se preocupa sobre todo de la justicia. Al admitir que las condiciones materiales de los entornos urbanos son históricamente específicas, la EPU se centra en las formas en que los procesos de cambio urbano han sido muy controlados y manipulados para servir a los intereses de la elite sin tener en cuenta las poblaciones marginadas (Swyngedouw y Heynen, 2003). La crítica de la producción social desigual de entornos urbanos suele ir de la mano de un enfoque explícitamente normativo. El programa político de EPU sirve, por tanto, para "destacar el contenido democrático de la construcción socioambiental al identificar estrategias por medio de las cuales se puede lograr una distribución más justa del poder social y un modo de producción ambiental más inclusivo" (Swyngedouw y Heynen, 2003, p. 898).

Aunque la EPU constituye un marco útil para comprender la infraestructura urbana, no ha sido hasta hace poco cuando se ha empezado a aplicar en los análisis de la electricidad. La EPU se ha venido desarrollando, sobre todo, en los estudios sobre el agua (Swyngedouw, 1996; Kaika, 2006; Loftus, 2006); es menos común verla aplicado a la infraestructura energética (importantes excepciones incluyen a Broto y Bulkeley, 2013, y Luque-Ayala y Silver, 2016).[3] La electricidad juega un papel tan importante como el agua en la formación de los procesos de urbanización; y en ciudades de Estados Unidos el acceso a la energía es ahora una precondición para la igualdad social, política y económica (Sovacool *et al*., 2014). Si consideramos las propiedades materiales únicas de la electricidad y su rol central en la configuración de la vida urbana, es importante desarrollar una EPU específica de la red eléctrica. Se perciben avances en un libro publicado recientemente que parte de la EPU para sintetizar aproximaciones conceptuales a las políticas de la red urbana, proponiendo tres focos: geografías desiguales, procesos de reconfiguración de la red, y movimientos sociales y protestas (Luque-Ayala y Silver, 2016). Otros

3 Un recuento de la frecuencia de los términos clave en reseñas de la EPU revela que en estas publicaciones se analiza mucho más el agua que la energía o la electricidad. En publicaciones sobre EPU citadas con frecuencia (Swyngedouw y Heynen, 2003; Keil, 2005; Heynen *et al*., 2006; Zimmer, 2010; Heynen, 2014), *agua* aparece muchas más veces (n = 15, 809, 14, 11, 29 respectivamente) que *electricidad* (n = 0, 43, 0, 1, 1) o *energía* (n=0, 32, 3, 1, 3).

explican cómo la EPU arroja luz teórica sobre las transiciones energéticas, cuando se pone el énfasis en cambios institucionales, materialidad, poder y espacio (Gailing y Moss, 2016).

Este artículo contribuye a esta serie de publicaciones emergentes con el análisis de un contexto poco estudiado todavía: la energía solar de azotea y la fijación de tarifas por parte de las compañías eléctricas en Estados Unidos. La perspectiva de la ecología política urbana constituye el eje de nuestro análisis sobre el papel de la economía política y la materialidad en la configuración de la gobernanza energética, en la energía solar de azotea y en la justicia energética. Aproximándonos a lo urbano desde una mirada relacional, intentamos hacer operativo el enfoque del "sistemas de energía completos", desde el que se reconocen las múltiples dimensiones que tiene la justicia en diferentes puntos de producción y consumo energético (Jenkins *et al*., 2016).

La subasta eléctrica de TEP en contexto

En Tucson la potencia eléctrica siempre ha sido fuente de disputas. La compañía ahora denominada Tucson Electric Power comenzó a operar en 1892, justo cuando la electrificación comenzaba a llegar a las ciudades estadounidenses. En 1901 Tucson y TEP firmaron su primer contrato de franquicia de veinticinco años, el cual sigue vigente tras la última renovación en 2000. Cuando en 1912 Arizona se convirtió en estado de Estados Unidos, la Arizona Corporation Commission comenzó a regular las tarifas y a supervisar a las empresas públicas del estado. A diferencia de la mayor parte de los estados, donde estos reguladores son nombrados por el gobernador, la ACC, con sus cinco comisionados electos, constituye la cuarta rama del gobierno del estado. Quienes redactaron la Constitución decidieron elegir comisionados para evitar que los gobernadores nombraran cargos que fuesen favorables para ciertas industrias. Tan pronto como se constituyó la ACC, la ciudad de Tucson (de aquí en adelante, "Tucson") denunció a la compañía por discriminar y cobrar a unos clientes más que a otros, argumentando que cincuenta centavos al mes por el alquiler del contador eran "excesivos e irrazonables" (TEP, 2016c).

TEP hizo su primera propuesta de tarifas a la ACC en 1961; solicitó un aumento de 12%; al final se aprobó 10.5% después de tres días de sesiones (TEP, 2016c). Aparte de que hoy en día las audiencias judiciales duran mucho, la estructura básica de la relación de TEP con ACC y Tucson no ha cambiado. Como compañía eléctrica propiedad de inversores, TEP sigue teniendo el monopolio en tanto que empresa pública regulada por la ACC para garantizar tarifas "justas y razonables" para los consumidores, así como una tasa de devolución "razonable" para los accionistas (ACC, 2014). Lo que es justo y razonable siempre ha sido motivo de debate, teniendo que actuar la ACC como árbitro entre los intereses de los accionistas y los de sus clientes. De esta manera, TEP ha ocupado una posición política y económica notablemente similar durante el último siglo: está regulada por la ACC, es responsable para con los accionistas foráneos y mantiene una relación de franquicia con Tucson. Además, la regulación sigue siendo motivo de preocupación y se continúan cuestionando las tarifas.

En la historia reciente, la generación descentralizada y las renovables han supuesto nuevos retos para empresas monopolio como TEP. Si bien los conflictos entre la producción de energía solar a pequeña escala y la industria eléctrica de Estados Unidos se remontan a la década de los setenta, por aquel entonces los niveles de integración de GD eran muy bajos. Esto ha cambiado desde el año 2000, como resultado del rápido crecimiento de la GD solar debido sobre todo a tres causas: la disminución del costo de la energía fotovoltaica y el aumento del precio medio de la electricidad; los incentivos fiscales federales y estatales, y las considerables inversiones por parte de las industrias financieras y tecnológicas mediante, sobre todo, modelos de propiedad de terceros (Hess, 2016). A niveles más altos de implementación, la GD disminuye las ganancias de las compañías eléctricas y amenaza su modelo de negocio al impedir su monopolio en el mercado eléctrico (Oppenheim, 2016). Desde 2013 las compañías eléctricas han reaccionado con diversas estrategias mediante asambleas legislativas, tribunales y mercados (Hess, 2016).

Durante los últimos cinco años, las tres empresas monopolio de Arizona han desempeñado un papel central en la respuesta del sector a la energía solar de azotea; con TEP y UniSource Energy Services (UES) a menudo

siguiendo al mayor proveedor del estado, Arizona Public Service (APS). En 2012 el APS se convirtió en uno de los primeros en proponer cambios en las tarifas con el objetivo de recuperar de los clientes de paneles solares las ganancias perdidas por medio de un cargo mensual anterior de 50-100 dólares estadounidenses (Blackburn *et al*., 2013). Si bien esta propuesta fue aprobada por la ACC a un nivel bastante inferior, desencadenó políticas contenciosas que se desarrollaron mediante propuestas de tarifas adicionales, reinterpretaciones de las leyes de impuestos de propiedad y reclamaciones de influencia indebida de las compañías sobre los reguladores (Hess, 2016). Aunque el APS inició una de las primeras iniciativas para debilitar la energía solar, las empresas monopolio del estado son líderes de la energía renovable. En 2014 y 2015, APS y TEP se convirtieron en las primeras empresas monopolio del país en ofrecer a sus clientes los programas de paneles para dueños solares. Asimismo, TEP se comprometió a obtener de energías renovables 30% de la electricidad que genera antes de 2030, yendo más allá de la exigencia del estado de Arizona de 15 % para 2025 (TEP, 2016a). Esta paradoja subraya la tendencia, como señaló una persona entrevistada, de que las compañías eléctricas de Arizona son partidarias de la energía solar "siempre y cuando la posean" (25-05-2016).[4]

La respuesta de TEP y APS a los paneles solares tiene sentido en el contexto histórico del pacto regulatorio que ha estructurado la industria de la energía eléctrica durante el último siglo. Basado en parte en el consenso de que la economía de mercado ignoraba la justicia social (incluidos los objetivos de servicio universal), el pacto regulatorio ofrece "tarifas justas y razonables" a cambio de la seguridad de los inversores, o una capacidad garantizada para obtener un rendimiento "razonable" de las inversiones para financiar proyectos con interés público (Oppenheim, 2016). El pacto regulatorio se basa en la regulación de la tasa de rentabilidad, que recompensa a las empresas públicas por generar y vender cantidades cada vez mayores de electricidad (Lazar, 2016). Sin embargo, desde 2007 las ventas de electricidad en Estados Unidos han venido disminuyendo casi todos los años (EIA, 2016). Por tanto, este modelo de negocio se enfrenta

4 A los informantes, o bien no los nombramos o nos referimos a ellos mediante seudónimos para respetar su anonimato. Las citas las recogemos según la fecha (DD-MM-AAAA).

a desafíos sin precedentes relacionados con la eficiencia energética, la desintermediación de terceros de las soluciones energéticas del lado de la demanda y, sobre todo, la GD (Blackburn *et al*., 2013).

Es en este contexto en el que se formó la solicitud de TEP de junio de 2015 para reformar la medición neta minorista (MNM), que la ACC no archivó como una licitación completa hasta septiembre. En la subasta tarifaria, TEP propuso tres cambios con implicaciones directas de cara a la justicia energética y a la energía solar en los techos (resumidos en la Tabla 2): reemplazar la MNM con una tarifa de "valor de la energía solar" (Apartado 1), aumentar el cargo mensual por servicio básico y agregar un nuevo cargo por demanda basado en el uso mensual máximo del cliente (TEP, 2015). Los debates sobre la reforma de la MNM fueron cuestionados en particular. TEP anunció su decisión de reformar la MNM sin la aprobación de la ACC e incluyó una fecha de derechos adquiridos en junio de 2015 para los clientes existentes. Esto supuso una dificultad para los instaladores solares que ya no podían estimar los tiempos de amortización al no tener garantizada la nueva estructura de tarifas (entrevista, 25-05-2016). En respuesta a la propuesta de reformar la MNM, Solar City (una empresa de instalación nacional con 70 % de las acciones de Tucson) gastó tres millones de dólares estadounidenses en respaldar a un Comité de Acción Política que lanzó una iniciativa electoral para consolidar la MNM en la constitución de Arizona (Trabish, 2016). A medida que iba constituyéndose a principios de 2016 el movimiento electoral, las legislaturas conservadoras introdujeron una iniciativa electoral competidora y ambos esfuerzos fracasaron tras alcanzar un acuerdo a puerta cerrada. Estas iniciativas electorales en duelo revelan la naturaleza altamente politizada del debate de la MNM, presente incluso en otros contextos que no son la subasta de TEP.

Tabla 2. Propuestas en la subasta de TEP y resultados relevantes para los paneles solares de particulares

Cuestión	Propuesta inicial	Resultado
Medición neta minorista (MNM)	Interrupción de la MNM (exceso de GD solar compensada a una tarifa minorista de 0.115 dólares estadounidenses/kWh) y compensación a nuevos clientes de GD con una tarifa de crédito renovable de 0.058 dólares estadounidenses/kWh.	Reemplazo de la MNM con un valor de tarifa solar basado en una metodología de costo evitado, con el crédito exacto decidido en la fase 2 de la subasta de tarifas, la cantidad sigue sin estar aprobada, pero con base en la última propuesta es probable que sea de 0.097 dólares estadounidenses/kWh).
Exención de la MNM	Quienes sean clientes de la industria solar desde antes del 1 de junio de 2015 mantendrán la MNM durante veinte años.	Los clientes con cubiertas solares (o que hayan presentado una solicitud para interconectar un nuevo sistema solar GD) antes de la fecha en que se aprueben las nuevas tarifas solares (probablemente a finales de 2017) conservarán la MNM durante veinte años.
Tasa por servicio básico (TSB)	Aumento de diez a veinte dólares estadounidenses/mes para todos los clientes particulares.	Aumento a trece dólares estadounidenses/mes con opción a diez dólares estadounidenses/mes para clientes que adopten un diseño de tarifa de tres partes.
Diseño de tarifa para particulares	Cambio obligatorio de tarifas de dos partes (TSB + tasa volumétrica) a tres partes (+ tasa por demanda basado en el mayor uso de energía por hora) para nuevos usuarios de GD.	Los clientes de GD y no GD eligen entre un plan de dos partes (con TSB de trece dólares estadounidenses/mes) o nuevos planes de tres partes, incluidas las opciones de tiempo de uso y demanda máxima (conservación de TSB de diez dólares estadounidenses/mes).
Impacto estimado en la factura	Incremento de 11.91 dólares estadounidenses/mes para el cliente particular promedio.	Incremento de 8.50 dólares estadounidenses/mes para el cliente particular promedio.

Al igual que en otras subastas, el propósito de la solicitud de TEP era establecer "tarifas y tasas justas y razonables diseñadas para obtener una tasa de rendimiento razonable sobre el valor justo de las propiedades de la compañía Tucson Electric Power" (TEP, 2015). La subasta siguió un proceso regulatorio bien establecido (Lazar, 2016) que duró más de dieciocho meses, en el cual se nombró un juez de derecho administrativo (JDA) para supervisar el caso y hacer una recomendación a la ACC, que finalmente votaría para aprobar, enmendar o rechazar la propuesta del JDA. En la subasta intervinieron veintisiete partes, incluidas otras empresas públicas de AZ, el Gobierno local, compañías e instituciones que compran electricidad a TEP, grupos del sector de la industria solar y defensores de esta sin ánimo de lucro.[5] Se concedió un espacio en la mesa de negociación a cada parte interviniente y la oportunidad de brindar testimonio oficial. La comunidad consumidora pudo hacer llegar directamente sus opiniones vía internet y en audiencias públicas a los comisionados. Los testimonios y comentarios fueron recogidos por el JDA en una orden y opinión recomendada (OOR) que la Comisión finalmente aprobó con enmiendas (Rodda, 2017).

La subasta de TEP pasó por varios de estos ciclos, con varias OOR y rondas de votación que abordaron diferentes aspectos de la solicitud de la empresa (Tabla 2). En agosto de 2016 el caso se dividió en dos partes; la decisión en relación con la MNM se aplazó a la Fase 2, tras concluir con la separación del VES en curso. Este proceso concluyó en diciembre de 2016 con la decisión de reemplazar la MNM con una tarifa de VES basada en una metodología de costo evitado, dejando los cálculos exactos para

5 Las partes intervinientes abarcaban desde corporaciones y servicios públicos (Freeport Minerals Corporation; Nobles America Energy Solutions; Arizona Investment Council; Arizona Public Service Company; Kroger; Wal-Mart Stores, Inc. y Sam's West, Inc.; Tucson Meadows; SOLON Corporation) hasta organizaciones sin ánimo de lucro (Alianza de clientes de servicios públicos de Arizona; Vote Solar; los miembros de Arizona del Sierra Club; Energy Freedom Coalition of America; Arizona Solar Energy Industries Association; The Alliance for Solar Choice; Western Resource Advocates; Arizona Community Action Association; Southwest Energy Efficiency Project; Southern Arizona Home Builders Association; Arizona Solar Deployment Alliance; Arizona Competitive Power Alliance), sindicatos (The International Brotherhood of Electrical Workers, Local Unión 1116), entidades gubernamentales (Condado de Pima, Arizona Residential Utility Consumers Office RUCO, Departamento de Defensa de Estados Unidos y todas las demás agencias ejecutivas federales) y clientes particulares.

licitaciones tarifarias de casos particulares (Jibilian, 2017). En febrero de 2016 la Fase 1 resolvió las cuestiones de diseño de otras tarifas al aumentar el cargo por servicio básico de diez a trece dólares estadounidenses para todos los clientes y al crear una opción para que estos puedan mantener la tasa mensual de diez dólares si eligen tarifas de tiempo de uso o facturas bajo demanda (Rodda, 2017). En comparación con los doce dólares estadounidenses de la propuesta inicial de la empresa, se esperaba que estos cambios supusieron un incremento de 8.50 dólares estadounidenses de media en las facturas de los consumidores (Wichner, 2015; 2016a). Mientras redactamos este artículo, la cantidad exacta del VES de TEP sigue sin estar aprobada, pero con base en la última propuesta es probable que sea de 0.097 dólares estadounidenses/kWh, en comparación con los 0.115 dólares de antes (Walton, 2017).

Si bien las nuevas tarifas de TEP alargarán el periodo de reembolso para los consumidores de energía solar de azotea e incrementarán las facturas de todos los clientes, estas solo representan una victoria parcial para la empresa. En este sentido, sigue un patrón predecible de compromiso entre la propuesta de la empresa y los intereses de los clientes por precios de la electricidad más bajos y más energía solar (Elias *et al*., 2013). La tasa de rentabilidad de las acciones se aprobó en 9.35%, por debajo de la solicitud inicial de la empresa, de 10.35% (Rodda, 2017). De manera similar, la oposición de la clientela y de la industria al aumento de las tasas de servicios básicos y a la suma de las tasas por demanda quizá influyó en la decisión de la Comisión de hacer voluntarias las tasas por demanda y de aprobar una tasa por los servicios básicos mucho más baja (trece dólares estadounidenses) que la propuesta inicial de TEP de veinte dólares/mes (Rodda, 2017). Estos resultados sugieren que TEP y el ACC respondieron a los sentimientos de los consumidores, en especial a las preocupaciones sobre la pobreza energética. No solo ACC se comprometió, también TEP aumentó las ayudas a las facturas y redujo el umbral de elegibilidad en su programa Lifeline para hogares de bajos ingresos (TEP, 2017). Asimismo, TEP puso en marcha un programa piloto para instalar mil termostatos inteligentes Nest en hogares de clientes de bajos ingresos (TEP, 2016b). Sin embargo, se espera que la decisión de eliminar la MNM "acabe con la

industria [solar de azotea] en Arizona" (Wichner, 2016b). En la siguiente sección repasamos las declaraciones de justicia que se movilizaron para apoyar y responder a dichas acciones, y analizamos lo que evidencian sobre las implicaciones que tiene la energía solar de azotea en la justicia energética.

Energía solar de azotea y narrativas de justicia

> Es mercadeo. Es solo un argumento estúpido, infundado y político. Los precios están manipulados. Los Diamondbacks y los Cardinals pagan una tarifa diferente a la comercial. Las minas industriales pagan otra tarifa. No recuerdo cuántas tarifas distintas hay para determinados clientes basadas solo en juicios de valor.
> (Candidato en las elecciones de ACC, 16-08-2016).

En esta sección presentamos los resultados de un análisis narrativo de los debates sobre la energía solar de azotea, a partir de entrevistas, observación participante, documentos y comentarios públicos registrados en la subasta de tarifas de TEP. Los ecologistas políticos suelen utilizar el análisis narrativo para cuestionar cómo se construyen las explicaciones ambientales y científicas y a quiénes benefician (Bixler, 2013; Nijbroek, 2014). Las narrativas solo pueden entenderse en relación con un contexto social más amplio. Por consiguiente, partimos de la ecología política urbana para analizar cómo el poder, la economía política y la materialidad de las infraestructuras guardan relación con tres tipos co-constitutivos de la (in)justicia: distributiva, procedimental y de reconocimiento (resumen en la Tabla 3).

Justicia distributiva: la narrativa del desplazamiento de costos

En el contexto de la energía, la justicia distributiva requiere la distribución justa de los bienes y prejuicios sociales relacionados con la producción o el consumo energético (Sovacool y Dworkin, 2015). El argumento del des-

plazamiento de costos de TEP es una narrativa de justicia distributiva. La empresa sostiene que la medición neta minorista permite a los clientes de energía solar evitar pagar la parte justa de los costos fijos para mantener la red de la que dependen, lo que crea una subvención cruzada regresiva de los clientes de ingresos más altos a los de ingresos más bajos (TEP, 2015). La proposición de la compañía se basa en la premisa de que estas nuevas estructuras de tarifas distribuirán los costos de suministro de servicios de electricidad de forma más justa entre los consumidores.

Tabla 3. Resumen del análisis: los efectos que tiene la energía solar de azotea en la justicia energética en Tucson, AZ.

Tipo de justicia	Narrativas en la subasta de TEP	Análisis: efectos de los paneles solares de particulares
Distributiva	La energía solar de azotea desplaza los costos de los clientes de ingresos más altos a los de ingresos más bajos; la energía solar beneficia a todos los clientes gracias a que no necesita cables y evita los costos ambientales/sociales; la narrativa de la empresa sobre el desplazamiento de costos es subjetiva y contingente.	Las implicaciones distributivas dependen de procesos que son altamente cuestionados (por ejemplo, la subasta de TEP, el procedimiento VES, las elecciones de la ACC). Los efectos que tiene en la pobreza energética dependen de la presencia/ausencia de iniciativas que hagan la GD solar accesible a los clientes de bajos ingresos. La petición de TEP para que la MNM cree un subsidio cruzado regresivo se hizo realidad al decidir la ACC otorgar el aumento de tarifa justificado por dicha solicitud.

Procedimental	La subasta y la regulación de la empresa son injustas porque se priorizan los intereses de los accionistas; la energía solar de azotea promueve la participación pública en la gobernanza de la electricidad al crear posibilidades para una mayor justicia procedimental.	Los procesos en los que se decide la distribución son injustos. La subasta de TEP comienza con propuestas lanzadas desde la empresa y desde los intereses de la industria de combustibles fósiles (por ejemplo, el modelo legislativo de ALEC), y las estructuras político-económicas de relación entre la empresa y el Gobierno local/estatal dan a los valores de los accionistas una influencia desproporcionada (por ejemplo, impuesto de franquicia municipal, captura del regulador). Por primera vez, los paneles solares están favoreciendo la participación de la comunidad en la gobernanza de la electricidad, pero se necesita más investigación sobre las implicaciones que tienen en la justicia.
De reconocimiento	El VES debería reconocer los costes y beneficios externalizados; la participación pública de los defensores de la energía solar de azotea favorece un mayor reconocimiento de los valores e intereses de la clientela de la empresa.	La regulación de la tasa de rentabilidad conduce a una falta de reconocimiento sistemática de los valores que no son accionistas. Esto ha llevado a un proceso de licitación tarifaria y a la decisión de VES, que devaluaron las peticiones de justicia hechas por los defensores de la energía solar de azotea y validaron la narrativa del desplazamiento de costos de la empresa.

El discurso del desplazamiento de costos jugó un papel central al justificar la subasta de TEP ante los reguladores estatales, el Gobierno local, los clientes de la empresa y otras partes interesadas. En la primavera de 2015, el presidente ejecutivo de TEP, Dave Hutchins, convocó una reunión con el Ayuntamiento de Tucson para informar a la ciudadanía de lo que estaba por llegar con las tarifas. Su justificación fue bien atendida por un

alcalde conocido por ensalzar los beneficios de la energía solar en eventos de la industria:

> El actual régimen de tarifas genera una gran incertidumbre, algo que no favorece las inversiones y crea una barrera para quienes nos movemos rápidamente hacia una economía limpia. Las nuevas tarifas asegurarán nuestros ingresos, permitiéndonos planificar mejor y poder pasar de una generación sucia a una limpia (entrevista, 10-06-2016).

Así es como Brian Cohen, asesor legal del alcalde, recuerda la explicación que dio un representante de TEP. Recuerda que en TEP existía cierta preocupación con respecto al desplazamiento de costos de los clientes con ingresos más altos a los de ingresos más bajos:

> Dijeron: "Miren, tenemos un verdadero desplazamiento de costos de gente con altos ingresos a otra con ingresos más bajos, porque es la gente con medios y altos ingresos la que pone paneles solares en sus tejados. Estos son los clientes que más suelen comprar nuestro producto, así que obtenemos más ganancias de ellos. Pero cuando cambian de red, perdemos esa clientela esencial, y entonces quieren que les paguemos una tarifa minorista por la energía que devuelven. No solo perdemos beneficios al perderlos como clientes, sino que también perdemos ganancias porque ahora ellos quieren que les paguemos por eso que generan. ¿Y quién se queda en la red? Las personas de ingresos más bajos. Y entonces son ellas quienes tienen que pagar más por nuestras inversiones en infraestructura". Así que este era uno de sus argumentos, y era como, oh, eso no pinta muy bien (entrevista, 10-06-2016).

Cohen recuerda que TEP equiparó el desplazamiento de costos de la GD solar con la iniciativa de la ciudad de recoger el agua de lluvia. Dicho programa fue financiado mediante un impuesto de conservación en la factura de cada consumidor, que consiste en dar incentivos a los hogares y pequeños comercios que instalen jardines de lluvia y depósitos de agua. Sin embargo, el Ayuntamiento se dio cuenta de que, de manera despropor-

cionada, los hogares de mayores ingresos se aprovechaban del reembolso. En una entrevista, Cohen señaló un mapa de sistemas de captación de agua de lluvia instalados en el marco del programa, en el que se veía que había más cantidad en Catalina Foothills, un barrio rico al norte de Tucson. "Lo pagamos todos, pero solo lo usan los ricos", explicó. "Cuando TEP vino y dijo que la medición neta minorista era como el programa de cisternas de agua de lluvia de ustedes, lo descubrimos".

Las interacciones de Tucson Electric Power con el Ayuntamiento son un ejemplo de cómo el discurso del desplazamiento de costos jugó un papel crucial al justificar la subasta de TEP ante el Gobierno local y los reguladores estatales. Esta narrativa acabó poniéndose en práctica por medio de la licitación de TEP y el procedimiento en ámbito estatal de VES, que determinó que el valor de la GD solar debía basarse en una metodología de costo evitado utilizando un marco de cinco años que no incorporara beneficios sociales o económicos (Jibilian, 2017). Al validarse el discurso de la compañía, se ignoró el "análisis completo de costos y beneficios a largo plazo" que los defensores de la energía solar de azotea habían solicitado de manera reiterada para respaldar su argumento de que la energía solar beneficia a todos los clientes (Jibilian, 2017).

Los defensores de los paneles solares respondieron de manera más explícita al discurso de TEP del desplazamiento de costos, al afirmar que la metodología para calcular el valor de la energía solar GD debería tener en cuenta más tipos de costos y beneficios y darse en un periodo más largo. Se referían a ello como injusticia ambiental y explicaban que la electricidad generada para dar servicio a Tucson también afectaba a lugares y actores que se hallaban lejos. Un físico local afirmó lo siguiente en la audiencia de la subasta de TEP:

> De hecho, el carbón tiene efectos significativos en la salud; en particular, para la gente que trabaja en las minas de carbón y en la producción de combustibles para las plantas de energía eléctrica, y para quienes viven alrededor de estas, incluyendo la Nación Navajo [...] La energía renovable segura, limpia no genera ninguno de estos impactos (entrevista, 31-08-2016).

El control de TEP sobre 7.5% de la central térmica de carbón Navajo Generating Station fue, en repetidas ocasiones, un referente para los defensores de la energía solar, que sostenían que el valor de esta debía costarle menos a la población marginada, las generaciones futuras y el ambiente. Estas declaraciones las repitieron en bastantes ocasiones grupos de la industria como The Alliance for Solar Choice, que citó estudios en los que se calcula el valor de la GD solar en 0.237 dólares estadounidenses (comparado con la tarifa minorista de TEP de 0.115 dólares estadounidenses) basados en una metodología que incorpora beneficios ambientales, de desarrollo económico y de seguridad de la red (Jibilian, 2017). Esta conveniencia de la metodología con los intereses es consistente con los debates de VES en otros estados, donde los estudios encargados por las empresas ponen el énfasis en los costos de los paneles solares; mientras que los de las compañías solares destacan los beneficios y ambos dependen del grado en que se incluya una serie de variables (costos de energía evitados, capacidad de generación, impactos de transmisión y distribución, beneficios ambientales y desarrollo económico) (Pitt y Michaud, 2015).

Además de explicar cómo se calcularon las implicaciones distributivas de la energía solar de azotea en la anterior VES, los defensores de los paneles solares se refirieron a la narrativa del desplazamiento de costos como subjetiva y contingente. Esto por lo general tomaba una de las siguientes formas. En primer lugar, los defensores solían insistir en que hay muchos cambios de costos en el sistema de electricidad de Tucson, lo que hace que el objetivo de la compañía respecto a la energía solar se vuelva subjetivo y político. Un comentario del presidente de la comisión conjunta de energía del condado lo evidencia: "A TEP le encanta hablar sobre los cambios de costos. ¿Qué tal si hablamos del cambio de costo que provoca su contaminación en las industrias de salud y de seguros, o en la calidad de vida de las personas?" (entrevista, 27-05-2016). Un segundo tema fue la reformulación del desplazamiento de costos como contingente al señalar los esfuerzos que realizan otros estados para volver más accesibles los beneficios de los paneles solares para los clientes de bajos ingresos. Por ejemplo, en 2006 la Legislatura de California aprobó la Propuesta de Ley 2723 de la Asamblea, que requería que la PUC del estado designase

específicamente dinero de la iniciativa solar estatal financiada por los clientes a instalaciones de FV solar en hogares de bajos ingresos. Como preguntó un cliente de la compañía en la audiencia:

> Entonces ¿por qué Arizona y TEP y esta Comisión no pueden hacer lo que han hecho otros estados y diseñar programas de energía solar de ingresos bajos? En vez de estar luchando para pagar sus facturas, como se escuchó decir a muchas personas, estaríamos ayudándoles a obtener energía solar en sus casas y haciendo que se reduzcan sus facturas (entrevista, 31-08-2016).

Al resaltar la posibilidad de permitir que los hogares de menores ganancias se beneficien de la energía solar, los participantes reformularon el discurso del desplazamiento de costos como supeditado a la falta de esfuerzos por parte de TEP y la ACC para volver accesible la GD solar, en vez de como resultado necesario de la tecnología y los mecanismos de facturación. La ecología política urbana ayuda a identificar estas interpretaciones contrapuestas de la justicia distributiva, comprendiendo la red eléctrica de Tucson como algo más que una colección de cables, generadores, subestaciones e inversores. Más bien, desde la EPU se entienden los paneles solares conectados a la red como parte de una entidad socionatural producida que refleja y refuerza las configuraciones del poder político (Swyngedouw y Heynen, 2003; Silver, 2016). Mientras que un análisis apolítico podría aceptar la narrativa de la justicia dominante de la compañía como algo dado, la EPU analiza este discurso en un contexto histórico, político-económico y material específico. Aunque finalmente la ACC aprobó la tarifa solar congruente con el análisis de TEP, enmarcar en la política la renovación de la instalación eléctrica y adoptar un análisis contextual nos ayuda a ver el desplazamiento de costos como una estrategia narrativa en lugar de como una declaración de justicia distributiva objetiva. Esto nos hace prestar atención al poder en los procesos de toma de decisiones que valoran la energía solar de azotea y determinan su impacto distributivo.

Justicia procedimental: participación pública y gobernanza de la electricidad

La justicia procedimental requiere acceso equitativo a los procesos de toma de decisión que gobiernan la distribución, en este caso, la subasta de TEP y otros procesos relacionados, como las elecciones de la ACC. Este tipo de justicia traslada la atención de la narrativa del desplazamiento de costos y las declaraciones contrapuestas de justicia distributiva a cuestiones que tienen que ver con la participación pública, los mecanismos de inclusión, la exposición de información y la representación institucional (Jenkins *et al*., 2016). El colectivo defensor de la energía solar hizo dos tipos de reivindicaciones con respecto a la justicia procedimental. El primero señalaba la economía política y las relaciones de poder para argumentar que, en términos generales, la subasta de TEP y la regulación de la empresa de Arizona se estructuran para favorecer los intereses de los accionistas de la compañía por encima de los de los clientes. Sin embargo, un segundo discurso sugiere que la energía solar de azotea puede favorecer una mayor justicia procedimental, al agrupar a públicos más comprometidos con la gobernanza de la electricidad.

Cuando TEP se reunió por primera vez con personal de Tucson, llevaron una memoria. Como recuerda Brian Cohen, en el documento se explicaba que "cuando hay más generación distribuida instalada en el área de servicio de la empresa, disminuyen los ingresos para la ciudad" (entrevista, 10-06-2016). Tucson recibe 2.25% del impuesto de franquicia de TEP, de modo que cuando se vende menos electricidad, la ciudad recauda menos (Ciudad de Tucson, 2017). "Claramente, eso no es bueno para nosotros", explicó Cohen. "Aunque nuestros costos energéticos suban, nuestras ganancias aumentarán incluso más. TEP tenía un número, cuánto dinero ganaremos con las nuevas tarifas y cuánto perderíamos si apoyamos la energía solar". No obstante, añadió que la ciudad equilibra sus intereses financieros como corporación municipal con su papel como representante de sus votantes. "El plan Tucson es inequívoco", dijo, refiriéndose al plan de la ciudad de 2013 desarrollado mediante un proceso de participación pública de varios años (Elias *et al*., 2013). "La población de Tucson dice que queremos energía solar, así que le

decimos a TEP que, desde nuestra posición, ese es el otro compromiso que hacemos con respecto a esto de las tarifas".

A pesar de ello, la ciudad no intervino en la subasta de TEP y muchos de los entrevistados achacaron esta decisión al impuesto de franquicia municipal que conecta los ingresos de la ciudad con los de la compañía. El acuerdo de franquicia solo proveyó en torno a 3% (14 699 330 dólares estadounidenses) del Fondo General de la ciudad en 2016 (Ciudad de Tucson, 2017). Como señala la descripción de Cohen de la memoria de TEP, el acuerdo de franquicia estructura las relaciones político-económicas en formas que desalentaron a la ciudad de intervenir y representar a sus votantes en la subasta de la empresa. Esta cuestión se acentúa cuando se contrasta la decisión de la ciudad de no tomar parte en la intervención del condado de Pima, y su firme oposición a las tres propuestas de tarifas de TEP relacionadas con la energía solar de azotea (Huckelberry, 2016). A diferencia de la ciudad, el condado de Pima no recibe impuesto alguno por los ingresos de la empresa. El alcalde y el Ayuntamiento de Tucson (2016) acabaron aprobando una resolución que se oponía a la subasta tarifaria de TEP, pero solo después de la considerable presión de la Comisión Energética Metropolitana del Condado de Tucson-Pima, una junta consultiva ciudadana. Al no intervenir en la subasta eléctrica, la ciudad no participó en debates ni dio testimonio oficial en el proceso que determinó la decisión de la ACC. Por tanto, la injusticia procedimental surge cuando la ciudad no puede representar el deseo de la población Tucson de más paneles solares, tal como se evidenció mediante un proceso de participación pública plurianual (Elias *et al*., 2013).

Los defensores de los paneles solares solían identificar otros dos ejemplos de injusticia procedimental que, de manera similar al impuesto de franquicia, priorizaban el rendimiento de los accionistas por encima de los valores de los clientes en los procesos que gobiernan la energía solar de azotea. En primer lugar, las personas entrevistadas señalaron que la propuesta de tarifas de TEP y el argumento de desplazamiento de costos son un reflejo de la legislación modelo de la organización de abogacía conservadora, la American Legislative Exchange Council (ALEC). Aunque la ALEC se identifica a sí misma como una ayuda legal para legisladores estatales, la organización recibe financiación de la asociación de comercio de la empresa propiedad de inversores, el Edison

Electric Institute, así como de ExxonMobil, Chevron, Peabody Energy, American Electric Power y Duke Energy. *The New York Times* describió a ALEC como un "influyente invisible de los negocios" (Cross *et al*., 2016). En 2014 la ALEC publicó una legislación modelo junto con un informe titulado *Reforming net metering: providing a bright and equitable future*[6] (ALEC, 2014; Tanton, 2014), que explica el desplazamiento de costos en la energía solar de azotea utilizando la misma lógica que TEP y otras empresas monopolio de Arizona en sus licitaciones tarifarias de 2015 y 2016: "Las políticas de medición neta permiten que los generadores distribuidos no paguen su parte de las inversiones en red, haciendo que sean otros usuarios de electricidad quienes paguen los costos [. . .] La medición neta, tal como se aplica en la actualidad, constituye un impuesto regresivo que subsidia al rico robando del bolsillo del pobre" (Tanton, 2014: 1). En Tucson, los defensores de la energía solar de azotea apuntaron a la legislación reforma MNM del modelo de ALEC para sugerir que la subasta de la empresa eléctrica se basa en una propuesta diseñada de manera engañosa para beneficiar a los accionistas de la compañía y de la industria de combustibles fósiles. Como dijo un empleado de una empresa de energía solar de Tucson: "La forma en que funciona la energía centralizada con los Koch Brothers y los intereses del Edison Electric Institute y de los combustibles fósiles son poderosos, es una campaña coordinada, nacional y centralizada que publica información engañosa y parcial sobre la medición neta" (entrevista, 09-06-2016).

Una tercera declaración relacionada con la injusticia procedimental señalaba la influencia indebida de la compañía en las elecciones de ACC. Como resumió un miembro de la Tucson-Pima County Metropolitan Energy Commission:

> Hay un verdadero problema en Arizona con el dinero negro que se destina a las campañas de la Comisión de Corporaciones. Por lo general se considera que, al menos, tres de los comisionados están fuertemente influenciados por el Servicio Público de Arizona. Mientras sigan teniendo esa capacidad de ejercer captura regulatoria, no son exactamente los reguladores quienes dicen a las empresas lo que deberían hacer, sino que es más bien al revés (entrevista, 27-05-2016).

6 Reforma de la medición neta: propuesta de un futuro brillante y justo.

Este discurso era común entre los defensores de la energía solar de azotea. Un candidato en las elecciones de la ACC en 2016 explicó cómo no es necesario demostrar la existencia de corrupción para reconocer sus efectos: "Las empresas han corrompido a la ACC; aunque no sea de forma abierta, existe corrupción. Y sin ninguna otra razón han intimidado totalmente a todos los políticos del estado de Arizona con campañas de dinero negro" (entrevista, 03-08-2017). Desde 2011, los debates sobre la medición neta y los paneles solares se han convertido en tema central de las políticas de la ACC, cuando dos demócratas proenergía solar perdieron sus escaños ante una comisión republicana en su totalidad. Es bien sabido que en 2014 la APS gastó 3.2 millones de dólares estadounidenses para influir en las elecciones de la ACC, y los defensores de la energía solar de azotea reclaman que el "dinero negro" de la empresa pone en tela de juicio la independencia y la ética de los reguladores estatales (Brown, 2016). Utilizando el impuesto de franquicia municipal, el modelo legislativo de ALEC, y el dinero negro en las elecciones de ACC como ejemplos, los partidarios de los paneles solares argumentaron que la regulación de la electricidad se estructura de forma que concede a la empresa un poder político y económico desproporcionado en la toma decisiones. No obstante, esta afirmación de justicia procedimental venía acompañada de una segunda narrativa que sugería que la energía solar tiene potencial para crear una mayor justicia procedimental si reúne a públicos más comprometidos con la gobernanza de la electricidad.

Dicho discurso de justicia procedimental giró en su mayor parte en torno a la idea de que la energía solar de azotea crea un público más informado y consciente de la infraestructura y gobernanza de la electricidad. Un instalador de paneles solares de la zona se refirió a este concepto con el neologismo *solaridaridad*, y dijo: "Me considero un soldado solar en 'solaridaridad', en colaboración con la comunidad del Desierto de Sonora, para alzarnos a favor de la energía solar para el pueblo" (entrevista, 31-08-2016). Continuó explicando cómo la propuesta de la empresa acabaría con muchos puestos de trabajo, como el suyo, que permiten que el trabajo significativo de los trabajadores "verdes" se enfoque en la crisis climática y en construir comunidad. "La energía solar ha sido muy gratificante para

mi alma. La 'solaridaridad' me ha motivado a conectar mucho más con nuestra maravillosa comunidad pública, la cual ha ayudado a florecer a nuestro movimiento político comunitario con el objetivo de abordar la calamidad climática y aprovechar nuestra abundante luz solar".

Otro socio vendedor de energía solar amplió el término de solaridaridad mediante la explicación de un proceso en el que los individuos que instalan las placas solares en sus casas se vuelven más comprometidos políticamente:

> Opino que los paneles solares empoderan a muchos niveles. Te permiten ser más consciente de tu propio consumo y uso. Cada sistema de energía solar viene con un *software* de monitorización, por lo que puedes convertirte en un participante más activo en el uso que haces de la energía e informarte más al respecto. Y cuando eres tu propio productor de energía, obviamente también te haces más consciente de lo que se te cobra y deja de ser una actividad rutinaria. De forma inherente, te comprometes más. Así que creo que hay una dialéctica tremenda. Y partiendo de ahí, si das un paso más y ves que estas fuerzas externas están inmiscuyéndose en tu casa o sistema, y que en el fondo estas no comparten tus intereses, entonces definitivamente te involucras más (entrevista, 09-06-2016).

La narrativa de la solaridaridad conectó la energía solar de azotea con la participación pública en la subasta de TEP y las elecciones de la ACC. En 2016, uno de los candidatos señaló que la decisión de las compañías eléctricas estatales de coordinar las licitaciones de tarifas en torno a la reforma de MNM tuvo la consecuencia imprevista de aumentar la conciencia general en cuanto a la comisión:

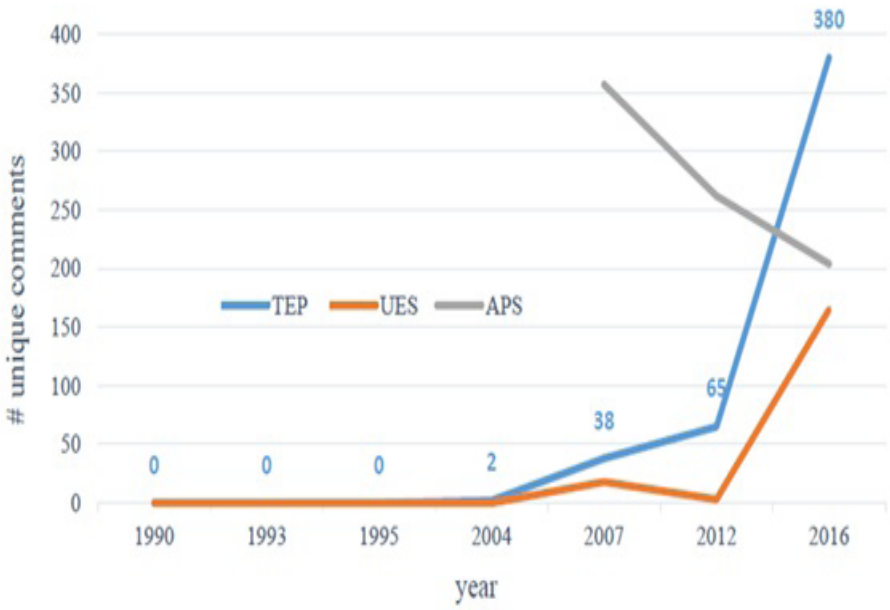
> Dado que este año todo el mundo ha solicitado una subasta eléctrica, de repente quienes pagan la factura de la empresa saben lo que hace la Comisión Corporativa. Esto incrementa la conciencia general sobre nuestra carrera (entrevista, 03-08-2016).

Tal como indicó otro entrevistado: "La dimensión del compromiso cívico en esta subasta no tiene precedentes" (entrevista, 09-06-2016). La partici-

pación pública se refleja en los comentarios de la comunidad consumidora archivados en las subastas de tarifas de TEP y UES en 2016, y se compara con otras previas (Figura 1). Por medio de la observación participante, también nos hemos percatado de que, en repetidas ocasiones, la ACC no estaba preparada para recibir tal número de asistentes en las audiencias públicas. Se llenó varias veces el aforo de las salas más grandes de la Comisión, hubo que desalojar los abarrotados pasillos para poder cumplir con los códigos de evacuación en caso de incendio, y se equiparon otras estancias de forma muy rápida para que los participantes pudieran seguir el acto por medio de pantallas (Figura 2).

Para que la energía solar de azotea mejore la justicia procedimental permitiendo nuevas formas de participación pública, es fundamental que exista la posibilidad (de manera implícita a veces) de una producción de electricidad solar distribuida. Esto centra la atención en las propiedades materiales únicas de la tecnología solar FV, que permiten que, por primera vez, un gran número de clientes de compañías eléctricas se conviertan en productores de energía. Así pues, la narrativa de la solaridaridad se vincula a la materialidad de la energía solar de azotea, lo que facilita un nuevo rol para la clientela de la empresa en tanto que consumidores y productores de electricidad (Gailing y Moss, 2016). Ampliamos esta cuestión en las conclusiones.

Figura. 1. Número de comentarios de consumidores por año en tres subastas de empresas propiedad de inversores de Arizona.



Fuenjte. Elaboración propia.[7]

Justicia de reconocimiento: ¿quién evalúa?

A menudo, quienes investigan la justicia energética parten de las teorías de Young (1990) y Fraser (1997), así como de posteriores interpretaciones (Schlosberg, 2004; Walker, 2009), para definir la injusticia de reconocimiento

7 Incluye comentarios recogidos hasta el 24 de febrero de 2017. Muestra comentarios individuales de consumidores en cuanto a las tarifas de TEP y el total archivado de los comentarios de consumidores sobre las subastas de APS y de UES. Debido a que el caso de eDockets incluye algunos registros de comentarios de consumidores con comentarios de numerosos consumidores, el total de los registros y el total de comentarios individuales no son equivalentes. Los comentarios singulares fueron eliminados para la subasta eléctrica de TEP porque es el tema principal de este artículo, mientras que los comentarios de los consumidores en los expedientes de UNS y APS solo se cuentan como registros y se tienen en cuenta para establecer comparaciones. Los autores señalan que los comentarios no aumentaron en el caso más reciente de las tarifas de APS, algo que puede deberse a que tuvo lugar en una etapa anterior a las subastas de TEP y de UES en las que se recogieron los datos.

como los procesos de falta de respeto, mal reconocimiento y falta de reconocimiento, así como de dominación política y cultural que degradan y devalúan a ciertas personas e identidades (Jenkins *et al*., 2016; McCauley *et al*., 2013). Un ejemplo de falta de reconocimiento aplicado a la energía es el del fracaso a largo plazo de los legisladores del Reino Unido por no reconocer que las personas mayores necesitan una temperatura ambiente más alta que la media, lo que hace que este grupo social sea más vulnerable a la pobreza energética que otros usuarios de la electricidad. El reconocimiento y la falta de respeto también se hacen evidentes cuando los constructores e inversores califican de egoístas, conservadoras e ignorantes a las personas autóctonas que se oponen a los parques eólicos (Jenkins *et al*., 2016). Si bien se desarrollaron dinámicas similares en la subasta de TEP, apelamos al reconocimiento en un sentido diferente, pero que guarda relación y tiene que ver con dos cuestiones: ¿qué valores y entendimientos de justicia se reconocen mediante los procesos de gobernanza eléctrica? ¿Por qué prevaleció la narrativa de justicia de la empresa por encima de la de los partidarios de los paneles solares?

Estas preguntas permiten un análisis más profundo de las narrativas de justicia procedimental de los defensores de la energía solar de azotea. En la sección anterior presentamos un discurso de justicia procedimental que relacionaba la energía solar con la participación pública en la subasta de TEP. Esto fue apoyado por un inesperado número de comentarios de consumidores y la percepción de algunos de que la energía solar construye una comunidad más comprometida con la producción y gobernanza de la electricidad. En dicha observación está implícito el hecho de que la participación puede favorecer la justicia mediante un mayor reconocimiento de los valores e intereses de los clientes particulares, los cuales están marginalizados con respecto a aquellos de los accionistas de la empresa y de la industria de combustibles fósiles.

Figura. 2. Participantes que esperan a ser admitidos en la audiencia de VES en la oficina principal de la ACC, en Phoenix.



Elaboración propia.

Sin embargo, el reconocimiento plantea dos cuestiones cruciales: qué clientes de la empresa participan y qué valores representan. Muchos habitantes no tienen el capital o el crédito necesarios para comprar o alquilar con derecho a compra un sistema de energía solar, y la legislación de Arizona excluye a los arrendatarios de participar en la GD solar. A estas barreras económicas para participar como propietario de energía solar de azotea hay que añadir las barreras culturales que impiden formar parte en los procesos de toma de decisiones. Puesto que se trata de procesos judiciales altamente formales y que consumen tiempo, las subastas eléctricas suelen excluir a los sectores de la población con menor nivel de estudios y que pueden sentirse menos cómodos hablando en público en inglés frente a los reguladores estatales, que en Arizona son todos hombres republicanos blancos. Si bien no hay datos demográficos de los participantes en la subasta, en el condado de Pima 28.6 % de las personas en sus casas hablan un idioma distinto al inglés (Censo de EE. UU., 2015)[8]. Como subrayó un informante en las audiencias, "nunca ha hablado toda la tarde alguien con un

8 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

bajo nivel de inglés" (entrevista, 31-08-2016). Si bien nuestros datos no hacen alusión explícita a la identidad y al reconocimiento grupal, la evidencia sugiere que los clientes de la empresa puede que no estén representados de manera igualitaria en las audiencias de las subastas.

Además de cuestionarse los clientes participantes de la compañía que se reconocen, la subasta de TEP revela un segundo, más sistémico tipo de injusticia de reconocimiento. En el apartado anterior analizamos los discursos de los defensores de la energía solar de azotea para identificar como ejemplos de injusticia procedimental el impuesto de franquicia municipal, la legislación de ALEC y la captura regulatoria. Al dar importancia en estos ejemplos al contexto histórico, la economía política y la materialidad, la EPU nos ayuda a entender cómo la falta de reconocimiento de los hogares clientes de la compañía está presente en las relaciones que forman la estructura de la regulación de la electricidad. Así pues, proponemos que la injusticia de reconocimiento se reconozca también como la marginalización sistemática de valores que no son los de los accionistas, es decir, los valores de justicia ambiental y social a los que hacen referencia los defensores de la energía solar de azotea.

En esta explicación estructural de la falta de reconocimiento, el modelo de negocios de la compañía basado en la regulación de la tasa de rentabilidad es una cuestión clave. Tal como señala Pima County en un testimonio recogido en la subasta eléctrica de TEP, "la energía solar de azotea está desafiando el modelo de negocios tradicional de la empresa", y "si se van a abordar completamente y a resolver de manera igualitaria los principales problemas (representados en las solicitudes recurrentes de tarifas que están en curso), se deben considerar los problemas sistémicos más profundos que subyacen en el caso TEP" (Huckelberry, 2016). Estas cuestiones sistémicas más profundas implican un modelo financiero que incentive nuevos proyectos de infraestructuras de la compañía que justifican un incremento en los costos y, por tanto, en los ingresos; seguido de solicitudes para modificar la estructura de tarifas que protege a los accionistas (Kind, 2013; Laitner, 2016). Sin embargo, puesto que la curva descendiente de la demanda y el rápido despliegue de los recursos de GD han cambiado los mercados de la electricidad, ahora TEP "trata de transferir los costos de su planificación a corto plazo a sus clientes (en lugar de a los accionistas) y de

limitar el crecimiento de las nuevas tecnologías, mediante el monopolio de la distribución de estos recursos" (Huckelberry, 2016).

Quienes defienden la energía solar de azotea también declararon que la forma en la que el modelo de negocios de TEP estructura la toma de decisiones ignora y devalúa cualquier prioridad que no sea rentable para los accionistas. Como afirmó un cliente de la empresa: "La razón por la que quieren continuar con el modelo que tienen es porque es una estrategia de fijación de precios por *costplus* (costo más un margen). No es racional. No tiene nada que ver ni con el libre mercado ni con nada realmente inteligente desde una perspectiva comunitaria" (entrevista, 31-08-2016). En una entrevista, un antiguo empleado del condado dijo que las justificaciones de la empresa para el desplazamiento de costos de la medición neta son "simplemente humo para distraer del 90% restante que se pedía", incluyendo un rendimiento de 12% de las inversiones y el pago de los costes laborales más altos del estado (entrevista, 02-08-2016).

La subasta eléctrica de TEP sólo puede entenderse en el contexto histórico de la regulación de la tasa de rentabilidad y las realidades materiales del abastecimiento de electricidad que hicieron de un monopolio regulado la única forma eficiente de proveer acceso generalizado a los servicios de electricidad (Oppenheim, 2016). No obstante, es bien sabido que en el actual panorama de la electricidad el modelo tradicional de la tasa de rentabilidad es inadecuado, así que los críticos han ofrecido estructuras alternativas basadas en incentivos que podrían abordar muchas de las dificultades que supone la energía solar de azotea para las empresas de Arizona (Lazar y González, 2015; Laitner, 2016; New York State Department of Public Services, 2017). Se relaciona el fracaso de la ACC para exigir nuevas estructuras de incentivo con las preocupaciones sobre la influencia que tiene la empresa en las elecciones de los reguladores estatales, denominada como "captura regulatoria" en el apartado anterior. Tanto el modelo de negocios de TEP como el fracaso para cambiarlo por las vías democráticas que existen dan forma a una economía política de fijación de tarifas de la empresa que favorece los valores de los accionistas sin tener en cuenta las demandas de (in)justicia hechas por aquellos a favor de los paneles solares.

Conclusión

Partir de la ecología política urbana para analizar los discursos sobre la (in) justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento en la subasta de TEP nos permite hacer, al menos, tres aportaciones en relación con nuestra pregunta inicial: ¿cuáles son las implicaciones de la energía solar en la justicia energética? Dichas contribuciones siguen un fluir lógico en este artículo para sugerir colectivamente que una evaluación más exhaustiva de la justicia y de la energía solar de azotea exige redirigir nuestra atención de la distribución al proceso y al reconocimiento. También revelan que la justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento son categorías analíticas útiles, pero inseparables en la política y en la práctica. En el caso de la energía solar de azotea, la justicia distributiva se supedita a las decisiones que se toman mediante un proceso que también informa de los valores que se reconocen.

En primer lugar, al reconocer las declaraciones antagónicas de justicia que politizan el argumento del desplazamiento de costos de TEP resignificamos el desplazamiento de costos como una narrativa estratégica. Este replanteamiento destaca el hecho de que hay varias interpretaciones de la justicia distributiva, a veces contrapuestas, que pueden aplicarse de manera estratégica. También desvía la atención de la cuestión de la justicia distributiva, situada en el centro de la investigación que existe sobre justicia energética y energía solar de azotea (¿cómo redistribuye la energía solar de azotea los costos de la electricidad por medio de las tarifas?) hacia los procesos que gobiernan la distribución. Este reenfoque va en línea con los llamamientos de los movimientos sociales de justicia ambiental y de la comunidad investigadora que resaltan la importancia de expandirse más allá de la distribución para tener en consideración la justicia procedimental y de reconocimiento (Fuller y McCauley, 2016; Schlosberg, 2004; Walker, 2009).

Con esta modificación, nuestro objetivo no es infravalorar la importancia de la justicia distributiva o afirmar que la respuesta de la empresa a los paneles solares es la equivocada. El fin último de la justicia energética es la distribución justa de los costos y beneficios de la electricidad, y, en muchos aspectos, las compañías eléctricas como TEP están mejor

posicionadas para llevar a cabo una transición justa hacia un sistema de electricidad alimentado por recursos de energía renovable. Sin embargo, nuestro análisis de la subasta de TEP sugiere que las implicaciones distributivas de los paneles solares dependen de los juicios de valor decididos mediante un proceso muy disputado en el que las empresas de servicios públicos propiedad de los inversores tienen un poder político y económico desproporcionado.

Esto nos conduce a una segunda idea relacionada con la afirmación de que la energía solar de azotea crea posibilidades para una mayor justicia procedimental al movilizar a los clientes de la empresa para que participen en los procesos de gobernanza de la electricidad que, de otro modo, estarían dominados por los intereses de los accionistas. Analizar esta afirmación necesita de dos pasos lógicos. Primero, hemos mostrado que en esta licitación de tarifas de TEP participaron más clientes de la empresa que en los años anteriores, y el concepto de solaridaridad vincula esta participación a la energía solar de azotea. Así pues, parece que el sector de la energía solar de azotea está aglutinando a colectivos que participan por primera vez en la gobernanza de la electricidad. Para destacar el agente de la energía solar de azotea en este proceso, proponemos una conceptualización de los públicos como colectivos sociomateriales de actores humanos y no humanos coproducidos y "hechos públicos" por procesos como la licitación de las tarifas de TEP (Chilvers y Longhurst, 2016; Clarke y Newman, 2009). Esto pone el foco en las propiedades materiales únicas de la energía solar de azotea que, a diferencia de otras tecnologías que generan electricidad, se puede colocar en la propia casa del cliente. La participación de estos nuevos públicos podría entenderse como la tendencia de la energía solar de azotea a contrarrestar los procesos mediante los cuales la infraestructura urbana se convierte en una caja negra o se normaliza dentro de los espacios de consumo (Graham, 2000)[9].

Sin embargo, una participación más amplia no necesariamente significa justicia procedimental, algo que puede hacer de la segunda parte de esta propuesta

9 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

una hipótesis para futuras investigaciones: la energía solar de azotea promueve una mayor justicia procedimental mediante la participación pública, la cual hace más democrática la gobernanza de la electricidad. Esta hipótesis aborda directamente las políticas energéticas que impulsan y hacen posible determinados tipos de configuraciones infraestructurales o sociomateriales (Mitchell, 2009). Nuestro análisis sugiere que nuevos públicos se reunieron alrededor de la energía solar de azotea y para algunos de ellos esto significó en cierto modo un compromiso cívico. Mientras que dicha participación trajo al caso TEP nuevos valores y peticiones de justicia, los efectos en la justicia distributiva y en la democracia dependen de los grupos sociales a los que representan y los valores que promueven. Es fundamental dirigir la (in)justicia del reconocimiento hacia la participación de los defensores de la energía solar de azotea, incluso más allá de nuestro ámbito de estudio. Las investigaciones futuras deberían seguir centrándose en su reconocimiento, y cuestionar qué tipos de políticas energéticas podrían fomentarse o facilitarse gracias a la energía solar en tejados como una configuración sociomaterial relativamente nueva.

Como tercera perspectiva, ofrecemos una explicación de cómo se (re)produce la injusticia del reconocimiento por medio de los debates sobre la energía solar de azotea en la licitación de las tarifas de TEP. Al analizar las narrativas sobre la energía solar y la justicia energética desde la EPU, adoptamos un enfoque relacional que entiende la licitación tarifaria de TEP en un contexto material e histórico específico. Nuestra intención ha sido mostrar cómo los ejemplos específicos de injusticia procesal (el impuesto de franquicia municipal, la legislación del modelo de ALEC y la captura regulatoria) son sintomáticos de un modelo de negocios que exige rondas continuas de inversión en las infraestructuras de la empresa. La regulación de la tasa de rentabilidad y el fracaso de las vías democráticas que existen para ajustar los incentivos a un mundo en el que la demanda de electricidad vaya en disminución perpetúan un proceso de fijación de tarifas que otorga un poder desproporcionado a los accionistas de la empresa por encima de su clientela. En consecuencia, las interpretaciones contrapuestas de lo que es un sistema de electricidad justo (las narrativas en torno a las que gira este artículo) se juzgaron mediante un proceso que de forma sistemática margina los discursos de la comunidad defensora de los paneles solares. Sugerimos que este tipo de injusticia puede ser útilmente entendida como la falta

de reconocimiento sistemática de valores que no son los de los accionistas, incluidos los beneficios y costos ambientales y sociales a largo plazo. Tal marco conceptual requiere que vayamos más allá del enfoque distributivo del análisis existente e incluyamos las consecuencias que tiene la energía solar en la azotea en la justicia procedimental y de reconocimiento.

Por último, esta mirada más detallada de la energía solar de azotea y de la justicia energética sugiere varios caminos que se deben seguir para conseguir un sistema energético más justo en el sur de Arizona. TEP y la ACC podrían desarrollar un programa solar de bajos ingresos para garantizar que los clientes más vulnerables a la pobreza energética puedan beneficiarse de las inversiones y los ahorros en energía solar. La legislación de Arizona podría modificarse para apoyar una MNM virtual o un mecanismo de facturación similar que hagan accesible la energía solar comunitaria y en los hogares para los clientes que no tienen las facilidades logísticas para la instalación de los sistemas en sus tejados (por ejemplo, quienes viven de alquiler o en pisos). Las futuras subastas podrían incorporar procesos de participación pública mejor organizados que tengan en cuenta a las poblaciones marginadas y se lleven a cabo en lugares menos formales. De igual forma, podría revisarse el valor de la tarifa solar para incorporar un marco temporal más largo que considere los costos y beneficios ambientales y sociales. Y lo más importante, la ACC podría pensar más allá de los modelos de la tasa de rentabilidad, y ofrecer incentivos regulatorios que alineen más las ganancias de la empresa con los valores sociales. En última instancia, dar cualquiera de estos pasos exigirá contar con los reguladores estatales progresistas, lo que convierte a las elecciones de la ACC en un punto inflexión que puede inclinar la balanza del poder político hacia procesos y resultados más justos. Aunque la renovación del acuerdo de franquicia de TEP en Tucson en 2025 abrirá posibilidades para nuevas políticas, es probable que los esfuerzos para presionar a la ciudad y a la empresa sean menos efectivos.

En el momento en el que escribimos este artículo, los proveedores de servicios eléctricos en la mayoría de los estados de EE. UU. están determinando las geografías de la energía renovable en los procedimientos similares a la subasta de TEP (Proudlove *et al.*, 2017). Las nuevas tarifas (re)producen configuraciones socionaturales de la infraestructura de la electricidad y hacen de estos procesos un tema poco abordado por la comunidad investigadora

crítica y otras personas interesadas en las dimensiones de la justicia en los sistemas energéticos en transición. Como demuestra este estudio de caso, la ecología política urbana constituye un enfoque útil para comprender la justicia energética al centrarse en el poder, la economía política y la materialidad de la red eléctrica. Si bien este artículo ofrece aportaciones iniciales sobre los efectos que tiene la energía solar de azotea en la justicia energética en el sur de Arizona, la diversidad regional en cuanto a infraestructura y a instituciones vinculadas al sector de la electricidad precisa que se atienda a las ecologías políticas urbanas únicas de cada caso.

Referencias[10]

ACC. (2014). *Background and organization*. Arizona Corporation Commission. https://www.azcc.gov/divisions

ALEC. (2014). *Updating net metering policies resolution*. American Legislative Exchange Council. https://www.alec.org/model-policy/updating-net-metering-policies-resolution/

Barrett, S. (2013). The necessity of a multiscalar analysis of climate justice. *Progress in Human Geography*, *37*(2), 215-233.

Bickerstaff, K., G. Walker y H. Bulkeley (eds.). (2013). *Energy justice in a changing climate: social equity and low-carbon energy*. Zed Books.

Bixler, R. P. (2013). The political ecology of local environmental narratives: power, knowlegde, and mountain caribou conservation. *Journal of Political Ecology*, *20*, 273-285.

Blackburn, G., C. Magee y V. Rai. (2013). Solar valuation and the modern utility's expansion into distributed generation. *The Electricity Journal*, *27*(1), 18-32.

10 N. de T. Las referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias pueden diferir de las referencias presentes en el artículo original

Bond, P. (2015). Can climate activists' "movement below" transcend negotiators' "paralysis above"? *Journal of World-Systems Research*, *21*(2), 250-270.

Brigde, G., S. Bouzarovski, M. Bradshaw y N. Eyre. (2013). Geographies of energy transition: space, place and the low-carbon economy. *Energy Policy*, *53*, 331-340.

Broto, V. C. y H. Bulkeley. (2013). Maintaining climate change experiments: ecology and the everyday reconfiguration of urban infrastructure. *International Journal of Urban and Regional Research*, *37*(6), 1934-1948.

Brown, K. P. (2016). In the pocket: energy regulation, industry capture, and campaign spending. *Sustainability: Science, Practice & Policy*, *12*(2).

Burnham, M., C. Radel, Z. Ma y A. Laudati. (2013). Extending a geographic lens towards climate justice, Part 1: Climate change characterization and impacts. *Geography Compass*, *7*(3), 239-248.

Calvert, K. (2015). From "energy geography" to "energy geographies": perspectives on a fertile academic borderland. *Progress in Human Geography*, *40*(1), 1-21.

Chilvers, J., y Longhurst, N. (2016). Participation in Transition(s): Reconceiving Public Engagements in Energy Transitions as Co-Produced, Emergent and Diverse. *Journal of Environmental Policy & Planning*, *18*(5), 585–607. https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1110483.

Ciudad de Tucson. (2017). *Adopted bugdet fiscal year 2017*. https://www.tucsonaz.gov/files/sharedassets/public/v/1/budget/17Book-Op.pdf

Clarke, J. y J. Newman. (2009). *Publics, politics, and power: remaking the public in public service*. Sage.

Cotty, S. 2015. *Regional greenhouse gas emissions inventory 1990-2012*. Pima Association of Governments.

Cross, R., G. Weissman y B. Fanshaw. (2016). *Blocking the sun: utilities and fossil fuel interests that are undermining American solar power (2016 edition)*. Environment America Research and Policy Center.

Darghouth, N. R., R. H. Wiser, G. Barbose y A. D. Mills. (2016). Net metering and market feedback loops: exploring the impact of retail rate design on distributed PV deployment. *Applied Energy*, *162*, 713-722.

EIA. (2016). *Total electricity sales fell in 2015 for 5th time in past 8 years*. U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=25352&src=email

Eid, C., J. Reneses, P. Frías y R. Hakvoort. (2014). The economic effect of electricity net-metering with solar PV: consequences for network cost recovery, cross subsidies, and policy objectives. *Energy Policy*, *75*, 244-254.

Elias, A., N. Ewing-Gavin, A. Sanchez, R. Ruopp, G. Chorover, M. Gayosso, A. Vargas, A. Bertelsen, B. Flores, M. Berube, N. Ross, B. Gallivan y M. Voris. (2013). *Plan Tucson: City of Tucson General & sustainability plan 2013*. https://www.tucsonaz.gov/pdsd/plan-tucson

EPA. (2017). *Sources of greenhouse gas emissions*. US Environmental Protection Agency.

Fainstein, S. (2010). *The just city*. Cornell University Press.

Forsyth, T. (2014). Climate justice is not just ice. *Geoforum*, *54*, 230-232.

Fraser, N. (1997). *Justice interruptus: critical reflections on the "postsocialist" condition*. Routledge.

Fuller, S. y D. McCauley. (2016). Framing energy justice: perspectives from activism and advocacy. *Energy Research and Social Science*, *11*, 1-8.

Gailing, L. y T. Moss (eds). (2016). *Conceptualizing Germany's energy transition: institutions, materiality, power, space*. Palgrave Macmillan.

Hess, D. J. (2016). The politics of niche-regime conflicts: distributed solar energy in the United States. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *19*, 42-50.

Heynen, N. (2014). Urban political ecology I: The urban century. *Progress in Human Geography*, *38*(4), 598-604.

Heynen, N., M. Kaika y E. Swyngedouw. (2006). *In the nature of cities: urban political ecology and the politics of urban metabolism*. Routlegde.

Huber, M. (2015). Theorizing energy geographies. *Geography Compass*, *9*(6), 327-338.

Huckelberry, C. H. (2016). *Pima County comments to the Arizona Corporation Commission: TEP rate case.* Arizona Corporation Commission.

Jenkins, K., D. Mccauley, R. Heffron, H. Stephan y R. Rehner. (2016). Energy justice: a conceptual review. *Energy Research & Social Science*, *11*, 174-182.

Jibilian, T. (2017). *Opinion and order: in the matter of the Commission's investigation of value and cost of distributed generation.* Arizona Corporation Commission.

Kaika, M. (2006). The political ecology of water scarcity: the 1989-1991 Athenian drought. En N. Heynen, M. Kaika y E. Swyngedouw (eds.), *In the nature of cities: urban political ecology and the politics of urban metabolism* (150-164). Routlegde.

Keil, R. (2005). Progress report - urban political ecology. *Urban Geography*, *26*(7), 640-651.

Kind, P. (2013). *Disruptive challenges: financial implications and strategic responses to a changing retail electric business.* Edison Electric Institute 26. https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2013/09/disruptivechallenges-1.pdf

Laitner, J. A. 2016. *Comments of John A. "Skip" laitner, ratepayers expect new economic wisdom (RENEW).* Arizona Corporation Commission.

Lazar, J. (2016). *Electricity regulation in the US: a guide. Montpelier, VT.* Regulatory Assistance Project.

Lazar, J. y W. Gonzalez. (2015). *Smart rate design for a smart future.* Regulatory Assistance Project. http://rapstaging.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/05/rap-lazar-gonzalez-smart-rate-design-july2015.pdf

Liverman, D. (2015). Reading climate change and climate governance as political ecologies. En T. Perreault, G. Brigde y J. McCarthy (coords.), *Routlegde handbook of political ecology* (252-253). Routlegde.

Loftus, A. (2006). The metabolic processes of capital accumulation in Durban's waterscape. En N. Heynen, N., M. Kaika y E. Swyngedouw (eds.), *In the nature of cities: urban political ecology and the politics of urban metabolism* (p165-182). Routlegde.

Luque-Ayala, A. y J. Silver. (2016). *Energy, power and protest on the urban grid: geographies of the electric city.* Routlegde.

McCauley, D., R. Heffron, H. Stephan y K. Jenkins. (2013). Advancing energy justice: the triumvirate of tenets. *International Energy Law Review*, *3*, 107-110.

Mitchell, T. (2009). Carbon democracy. *Economy and Society*, *38*(3), 399-432.

New York State Department of Public Services. (2017). *Reforming the energy vision: about the initiative.* https://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/CC4F2EFA3A23551585257DEA007DCFE2

Nijbroek, R. (2014). Mangroves, mudbanks and seawalls: whose environmental knowledge counts when adapting to sea level rise in Suriname? *Journal of Political Ecology*, *21*, 533-550.

Oppenheim, J. (2016). The United States regulatory compact and energy poverty. *Energy Research & Social Science*, *18*, 96-108.

Pitt, D. y G. Michaud. (2015). Assessing the value of distributed solar energy generation. *Current Sustainability/Renewable Energy Reports*, *2*, 105-113.

Preston, I., V. White, J. Thumim, T. Brigdeman y C. Brand. (2013). *Distribution of carbon emissions in the UK: implications for domestic energy policy.* Joseph Rowntree Foundation.

Procter, R. J. (2014). Fixed-cost recovery, renewables adoption and rate fairness. *The Electricity Journal*, *27*(5), 42-53.

Proudlove, A., B. Lips, D. Sarkisian y A. Shrestha. (2017). *50 states of solar: Q4 2016 quarterly report and annual review.* NC Clean Energy Technology Center.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice.* Press.

Rodda, J. L. (2017). *Opinion and order: Tucson Electric Power Company (rates).* Arizona Corporation Commission.

Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: global movements and political theories. *Environmental Politics*, *13*(3), 517-540.

Schlosberg, D. (2013). Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. *Environmental Politics*, *22*(1), 37-55.

Silver, J. (2016). Disrupted infrastructures: an urban political ecology of interrupted electricity in Accra. *International Journal of Urban and Regional Research*, *39*(5), 984-1003.

Sovacool, B. K. y M. H. Dworkin. (2015). Energy justice: conceptual insights and practical applications. *Applied Energy*, *142*, 435-444.

Sovacool, B. K., R. V. Sidortsov y B. R. Jones. (2014). *Energy security, equality, and justice.* RoutleGDe.

Stockton, H. y R. Campbell. (2011). *Time to reconsider UK energy and fuel poverty policies?* Joseph Rowntree Foundation.

Swyngedouw, E. (1996). The city as a hybrid: on nature, society and cyborg urbanization. *Capitalism, Nature, Socialism*, *7*(2), 65-80.

Swyngedouw, E. y N. C. Heynen. (2003). Urban political ecology, justice and the politics of scale. *Antipode*, *35*(5), 898-918.

Tanton, T. (2014). *Reforming net metering: providing a bright and equitable future.* American Legislative Exchange Council.

TEP. (2015). *Application testimony and exhibits (volume 1 of 4).* Arizona Corporation Commission. https://edocket.azcc.gov/search/docket-search/item-detail/19194

TEP. (2016a). *2016 Preliminary integrated resource plan*. Tucson Electric Power. https://docs.tep.com/doc/planning/2016-TEP-IRP.pdf

TEP (noviembre 14, 2016b). *New TEP program helps limited-income customers save with smart thermostats.* Tucson Electric Power. https://www.tep.com/news/new-tep-program-helps-limited-income-customers-save-with-smart-thermostats/

TEP. (2016c). *Our history*. Tucson Electric Power. https://www.tep.com/about/history/

TEP. (febrero 8, 2017). *New pricing plans, updated rates approved for TEP customers*. Tucson Electric Power. https://www.tep.com/news/new-pricing-plans-updated-rates-approved-for-tep-customers/

Trabish, H. K. (marzo 3, 2016). Inside the deal that averted a net metering ballot showdown in Arizona. *Utility Dive*. https://www.utilitydive.com/news/inside-the-deal-that-averted-a-net-metering-ballot-showdown-in-arizona/418392/

Tschakert, P. (2012). From impacts to embodied experiences: tracing political ecology in climate change research. *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography*, *112*, 37-41.

Tucson Mayor City Council. (julio 6, 2016). *Resolution no. 22598: relating to utility rates; authorizing and approving the submission of comments in cases pending before the Arizona Corporation Commission; and declaring an emergency*.

Walker, G. (2008). Decentralised systems and fuel poverty: are there any links or risks? *Energy Policy*, *36*, 4514-4517.

Walker, G. (2009). Beyond distribution and proximity: exploring the multiple spatialities of environmental justice. *Antipode*, *41*(4), 614-636.

Walton, R. (mayo 16, 2017). Tucson Electric Power proposes lower rooftop solar incentive rates. *Utility Dive*. https://www.utilitydive.com/news/tucson-electric-power-proposes-lower-rooftop-solar-incentive-rates/442787/

Wichner, D. (noviembre 5, 2015). TEP seeks to raise customers' energy rates. *Arizona Daily Star*. https://tucson.com/business/local/tep-seeks-to-raise-customers-energy-rates/article_93d40843-ca5d-58e2-a24a-1cf4085b6cbc.html

Wichner, D. (marzo 25, 2016a). TEP's new rate plans could cost more if customers fail to alter usage. *Arizona Daily Star*. https://tucson.com/business/tucson/tep-s-new-rate-plans-could-cost-more-if-customers/article_0bc95c84-e76d-51b8-ae19-565c023d477f.html

Wichner, D. (enero 20, 2016b). TEP solar customers have months to benefit from net-metering rules. *Arizona Daily Star*. https://tucson.com/business/tucson/tep-solar-customers-have-months-to-benefit-from-net-metering/article_64d094e6-08e7-5947-863a-bba942536f1b.html

Yamamoto, Y. (2012). Pricing electricity from residential photovoltaic systems: a comparison of feed-in tariffs, net metering, and net purchase and sale. *Solar Energy*, *86*(9), 2678-2685.

Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.

Zimmer, A. (2010). Urban political ecology: theoretical concepts, challenges, and suggested future directions. *Erdkunde*, *64*(4), 343-354.

24. Los pueblos indígenas y la política ambiental*[1]

Michael R. Dove

Resumen: La modernidad ha contribuido a popularizar y, al mismo tiempo, amenazar la indigeneidad. Los antropólogos cuestionan tanto la validez del concepto indígena, como la conveniencia de usarlo como herramienta política, pero se resisten a negárselo a las comunidades locales, cuyo uso se ha convertido en objeto de estudio. El concepto de conocimiento indígena es asimismo criticado en favor de los productos híbridos de la modernidad, y la idea del conocimiento ambiental y de conservación indígena es muy controvertida. En proyectos integrados de conservación y desarrollo y en reservas extractivas se debaten y ponen a prueba posibilidades de ecologismos alternativos y la combinación de objetivos de conservación y desarrollo. La comprensión antropológica de la agencia estatal y comunitaria se está replanteando, y se están desarrollando nuevos enfoques para el estudio de la colaboración, los movimientos por los derechos indígenas y la violencia. Estos y otros temas de interés actual relacionados con los pueblos indígenas problematizan la teoría antropológica y la ética y sugieren la importancia de analizar las contradicciones inherentes a la coevolución de la ciencia, la sociedad y el ambiente.

Palabras clave: conocimientos ambientales, conservación del ambiente, movimientos sociales, representación etnográfica, ONG.

---

1 Publicado originalmente en: Michael R. Dove, 2006, "Indigenous people and environmental politics": *Annual Review of Anthropology*, 35: 191-208.
*N. de T. Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

Definiciones de lo indígena

Mientras que las connotaciones del uso popular del término *indígena* se centran en la nacionalidad, las definiciones internacionales formales lo hacen más en la continuidad histórica, el carácter distintivo, la marginación, la autoidentidad y el autogobierno.

Diccionario de inglés Oxford (1999): 1. Nacido o producido naturalmente en una tierra o región; nativo o perteneciente naturalmente a (la tierra, región, etc.). (Usado principalmente de habitantes aborígenes o de productos naturales). 2. De, perteneciente a o destinado para los nativos; "nativo", vernáculo.

Organización Internacional del Trabajo (1989): (a) Pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la comunidad nacional y cuyo estatuto está regulado total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por leyes o reglamentos especiales; (b) los pueblos de países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica a la que pertenezca el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, independientemente de su estatuto jurídico, conservan total o parcialmente sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (OIT, 1989, artículo 1.1).

Naciones Unidas (1986[2]): Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con

2 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales (Cobo, 1986: 5).[3]

Introducción: el auge del indigenismo internacional

En el último cuarto de siglo, gran parte del interés de la antropología por los pueblos locales, nativos y autóctonos se ha enmarcado en términos de indigenismo, centrado en la historia y el lugar. Muchos de los movimientos locales que en el pasado se representaban en torno a la raza, la etnia o la religión, han pasado a considerarse, por los participantes y los analistas, movimientos por los derechos indígenas. Los temas de estudio y debate que antes se representaban como campesinos o miembros de tribus han pasado a ser representados como pueblos indígenas. Jung (2003) escribe que los sujetos indígenas de América Latina han sustituido a los campesinos como interlocutores privilegiados del Estado capitalista; Tsing (2003) escribe de una reimaginación en el sur y el sureste de Asia de los campesinos desfavorecidos en los planos económico y educativo, como tribales marcados en lo cultural y sabios por naturaleza. Los caucheros del Amazonas ejemplifican este cambio con su ascenso a la atención mundial acompañado de su rearticulación como indígenas del bosque (Keck, 1995). Otra rearticulación asimismo exitosa fue la de los zapatistas de Chiapas: su poco conocido movimiento campesino de reforma agraria alcanzó prominencia mundial tras ser reformulado como un movimiento sobre el indigenismo (Nugent, 1995).[4]* La creciente importancia mundial del indigenismo se reflejó en la elaboración de su definición por la Organización de las Naciones Unidas en 1986 y por la Organización Internacional del Trabajo en 1989 (esta última vinculante para los firmantes) que definen lo indígena en términos de continuidad histórica, singularidad, marginación, autoidentidad y autogobierno, y por la declaración de las Naciones Unidas de 1995 a 2004 como "la década de los pueblos indígenas".

---

3 N. de T. Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

4 Véanse los documentos recopilados sobre el movimiento zapatista en *Identidades*, *3*(1-2).
*N. de T.: No fue posible encontrar la referencia bibliográfica completa de esta cita específica citada anteriormente: " *Identidades*, *3*(1-2)"

La confluencia de fuerzas que conducen a la concepción de lo indígena con tal fuerza global ha sido sorprendentemente poco estudiada (en contraste con el propio concepto). Niezen (2003) atribuye los orígenes del indigenismo internacional al desarrollo intersectorial de la política de identidad y las leyes y los principios universales de derechos humanos. Otros análisis se centran en el impacto deslocalizador de la modernidad (Appadurai, 1996; Giddens, 1984). Hornborg (1996), por ejemplo, sugiere que la insatisfacción con el destino de los sistemas localizados de uso de recursos en los sistemas totalizadores de la modernidad estimuló el interés por lo indígena y los sistemas autóctonos de conocimiento y gestión de los recursos. Hirtz (2003) sugiere que la modernidad vuelve posible lo indígena en primer lugar. Escribe que "se necesitan medios modernos para volverse tradicional, para ser indígena"; como resultado, "por medio del proceso mismo de ser reconocidos como 'indígenas', estos grupos entran en el ámbito de la modernidad" (889).

La crítica de lo indígena

El concepto de lo indígena

El aumento del interés popular internacional por la indigeneidad es digno de mención, en parte, porque era tan opuesto a las tendencias teóricas de la antropología. Durante las décadas de los setenta y ochenta, el pensamiento antropológico sobre los pueblos indígenas se vio alterado de forma radical por los estudios del sistema mundo (Wolf, 1982), que llegaron a sostener que incluso las comunidades aisladas se hallaban inmersas en procesos históricos globales, los cuales eran responsables de su aislamiento. Muchos estudiosos empezaron a argumentar que la propia identidad indígena era producto de procesos políticos históricos. Li (2000), en referencia a la Indonesia contemporánea (y en particular a Sulawesi), afirma que, a diferencia de la visión de National Geographic sobre los pueblos tribales, la formación de grupos tiene un carácter político. En los casos en donde hoy existen identidades tribales claras, afirma, estas se remontan a historias

de confrontación e involucramiento, guerra y conflicto. También refiriéndose al sudeste asiático, Benjamin (2002: 9) argumenta de manera similar que, "desde este punto de vista, todas las sociedades tribales de las que se tiene constancia histórica y etnográfica son formaciones *secundarias*". La concepción académica de lo indígena también se vio afectada por influyentes investigaciones sobre la invención de la tradición (Hobsbawm y Ranger, 1983) y por el argumento asociado de que la propia cultura no es más que una construcción (Linnekin, 1992). Por esta razón, la búsqueda por la autenticidad cultural no tiene sentido.[5] Basándose en la obra del sociólogo y teórico cultural Stuart Hall, Clifford (2001) y Li (2000) han sugerido que una manera de suprimir este debate sobre la autenticidad es enfocarse en la articulación de lo indígena.

El debate sobre la indigeneidad llegó a su culmen con la publicación de la crítica de Kuper (2003) "El regreso del nativo", donde cuestionaba la validez empírica de las reivindicaciones de esta condición.[6] El debate que siguió indicó que referirse a lo indígena como algo inventado era mucho más polémico que referirse a la tradición (o quizá incluso a la cultura) como inventada, lo que sugiere que podría haber más capital político invertido en el primer concepto que en el segundo. El impacto del artículo de Kuper fue, en parte, hacer explícitas y públicas las tensiones entre la ciencia y la política dentro de la antropología. Cuestionó a la disciplina: "¿Debemos ignorar la historia por miedo a socavar los mitos de lo autóctono? Incluso si pudiéramos sopesar los costos y beneficios de decir esto o aquello, nuestra tarea debería ser rendir cuentas precisas de los procesos sociales" (Kuper, 2003: 400). Muchos de los que disentían con Kuper lo hacían basados en la política de la ciencia en contraposición al concepto mismo de lo indígena, que la mayoría concuerda en que es problemático.

Muchos antropólogos han comentado las implicaciones políticas negativas del concepto de indigeneidad. Algunos han comentado que es demasiado exclusivo. Gupta (1998: 289) escribe:

5 Compárese con la crítica de Clifford (1988, p. 1) de los "productos puros".

6 Hubo un amplio debate sobre el argumento de Kuper y, de manera más general, sobre toda la cuestión de la indigeneidad en 2002-2004, en *Anthropology Today*.

> Me temo que hay que pagar un precio muy alto por el énfasis que ponen los defensores del conocimiento indígena en la pureza cultural, la continuidad y la alteridad. Estos esfuerzos de conservación cultural no dan cabida a la inmensa mayoría de los pobres del mundo, que viven en los márgenes de la subsistencia y en las condiciones ecológicas más degradadas, pero que no pueden reivindicar una condición como 'pueblos indígenas' en la definición limitada otorgada a ese término.

Del mismo modo, Li (2000: 151) escribe, "uno de los riesgos derivados de la atención prestada a los pueblos indígenas es que algunos lugares y situaciones en el campo se privilegian mientras que otras se pasan por alto, limitando innecesariamente el campo en el que se podrían formar coaliciones e identificar y apoyar agendas locales". Estos riesgos son en particular grandes para las personas que se desplazan, lo que refleja la importancia del lugar en las concepciones de lo indígena (Li 2000). Mientras que el nomadismo y la trashumancia encajan con un nicho indígena reconocido, el número de personas implicadas en el reasentamiento, la migración y la huida es mucho mayor. Así, el conocimiento de los recursos y la capacidad de gestión de los ocupantes ilegales urbanos (Rademacher, 2005) y colonos fronterizos (Brondizio, 2004; Campos y Nepstad, 2006) han tendido a ser menos visibles, privilegiados y estudiados.

Plasticidad e inseguridad

Incluso para quienes son elegibles por su estatus indígena, el concepto puede ser un arma de doble filo. Rangan (1992) ha escrito acerca del impacto local negativo del abrazo global del movimiento por los derechos indígenas chipko en el norte de India y Conklin (1997) ha escrito sobre las desventajas de la adopción estratégica por parte de los pueblos amazónicos de las imágenes mundiales de lo indígena. Las aspiraciones y articulaciones de identidad indígena que parecen inauténticas y oportunistas pueden provocar el desdén y la sanción oficial, lo que Li (2000) considera una verdadera amenaza en Indonesia.

La identidad indígena en todo caso es un blanco estrecho que fácilmente sobrepasa o se queda corto. Por lo mismo, Li (2000) escribe que, si los pueblos se representan como demasiado primitivos, se arriesgan a la recolonización, mientras que, si se presentan como no tan primitivos, se arriesgan a la recolonización bajo otros argumentos. Una vez que los estatutos indígenas se han conseguido, las expectativas de una conducta apropiada pueden ser severas. Li (2000: 170) escribe que "los candidatos por el espacio tribal que se encuentran deficientes según los estándares ambientales que se esperan de ellos también deben estar prevenidos".

Sin embargo, en agudo contraste con el enfoque más cauteloso de la academia hacia lo indígena, el concepto ha viajado, ha sido transformado y desplegado con entusiasmo alrededor del mundo (Béteille, 1998). El mismo potencial que inquieta a los antropólogos sobre el concepto, lo vuelve más atractivo para muchos pueblos locales.[7] El término de Niezen (2003) de indigenismo internacional es un comentario irónico hacia esta movilidad. Lo más alarmante para los antropólogos es que las comunidades locales no solo están adaptando el concepto para sus propios usos, sino que están haciendo lo opuesto. Jackson (1995; 1999) ha escrito sobre cómo las nociones locales de historia y cultura en Vaupés, Colombia, están cambiando para encajar con la sabiduría global recibida de lo que constituye lo indígena; Pulido (1998) escribe del uso de los discursos ecológicos romantizados y del culturalismo en el sudoeste de Estados Unidos como un medio de resistencia de uso de las herramientas del maestro, y a Li (2002) le preocupa el bucle de retroalimentación por el cual una metafísica externa sedentarista está dando forma a la creencia y las prácticas de quienes se denominan indígenas en Indonesia.

Los casos obviamente calculados de despliegue de la condición indígena han generado, como era de esperar, un contragolpe político. Pero, lo que es más interesante, también han generado ajustes por parte de quienes lo han desplegado. Conklin (2002) escribe sobre un cambio de énfasis en Brasil de los derechos al conocimiento indígena y el chamanismo para

7 Compárese con la recomendación de Hodgson (2002) de que, en lugar de participar en debates sobre la definición, construcción y autenticidad de las reivindicaciones indígenas, los antropólogos deberían preguntarse cómo y por qué los grupos indígenas están empleando el concepto (pp. 1040, 1044).

contrarrestar esta reacción [compárese con la observación de Hornborg (2005) de que es cada vez más legítimo que los indígenas de Nueva Escocia invoquen imágenes de sacralidad en defensa de sus derechos sobre los recursos]. Los antropólogos también se han adaptado a la evolución de la situación empezando a estudiar el significado émic de la articulación de la condición indígena. Así, Oakdale (2004) ha estudiado el significado que las manifestaciones de cultura y etnicidad de los kayabi de Brasil tienen para los propios kayabi. Y Graham (2005), curiosamente, sugiere que a la articulación global de la condición indígena de los xavante de Brasil no la impulsan las políticas identitarias, sino una búsqueda de reconocimiento existencial. Esta dinámica de retroalimentación no es inesperada. Giddens (1984) ha examinado lo que él llama la interacción interpretativa entre la ciencia social y sus sujetos, y llega a la conclusión de que la teoría no puede mantenerse separada de las actividades que componen su objeto de estudio, una relación que denomina acertadamente la doble hermenéutica.

El conocimiento indígena y el ambiente

El conocimiento indígena

El discurso global del alto modernismo del siglo XX menosprecia el conocimiento local (Scott 1998), incluyendo el relacionado con el ambiente. Al igual que el desarrollo del concepto de lo indígena (Brokensha et al. 1980), fue una reacción a los efectos deslocalizadores de la modernidad y sus consecuencias para las comunidades locales; así, el aumento en el interés en el conocimiento indígena es en parte una respuesta a la visión descalificadora de la modernidad y sus consecuencias para las comunidades locales. En un esfuerzo explícito contra el discurso dominante sobre el desarrollo, los expertos en el conocimiento indígena argumentaron que los pueblos indígenas poseen sistemas de conocimiento únicos que pueden servir de base para intervenciones de desarrollo más exitosas (Nazarea, 1999; Sillitoe *et al.*, 2002). El interés por este concepto cobró tanta fuerza tan rápidamente (se invocó en el Principio 22 de la Declaración de Río de 1992) que en 1996 el

Banco Mundial declaró su propio compromiso con el conocimiento indígena y se comprometió a convertirse en banco de conocimientos. Los defensores del concepto de conocimiento indígena tenían en principio grandes esperanzas puestas en él, como ilustra Sillitoe (1998) cuando afirmaba que podría servir de base para una nueva antropología aplicada, al promover el desarrollo colaborativo con los sujetos de la antropología, así como una mejor colaboración Norte-Sur. Estudiosos de otras disciplinas han seguido líneas de investigación paralelas, como Scott (1998), que establece una distinción entre el conocimiento científico por un lado y el conocimiento partidista, situado, práctico, al que denominó *mētis*, del otro.

Al igual que el concepto de lo indígena, el conocimiento indígena pronto se convirtió en objeto de una amplia crítica. En un influyente análisis pionero, Agrawal (1995: 422) escribe:

> Ciertamente, lo que hoy se conoce y clasifica como conocimiento indígena ha estado en íntima interacción con el conocimiento occidental desde al menos el siglo XV. Ante las evidencias que sugieren contacto, variación, transformación, intercambio, comunicación y aprendizaje durante los últimos siglos, es difícil adherirse a la idea de que los conocimientos indígenas y occidentales no se han tocado mutuamente.

Ellen y Harris (2000) señalan que los orígenes epistémicos de muchos conocimientos, ya sean populares o científicos, están ocultos, y argumentan que el anonimato ha contribuido a la aparición de una brecha entre la práctica científica y el conocimiento indígena. Cuando se pueden revelar los orígenes del conocimiento, la etiqueta de conocimiento indígena a menudo se vuelve más cuestionable. En el caso del cultivo de caucho a pequeña escala en el sudeste asiático, un estudio más detallado revela que, aunque sí se trata de un impresionante sistema de conocimientos agroecológicos, difícilmente podría ser menos indígena por naturaleza (Dove, 2000). Hornborg (2005) señala que los llamados sistemas de conocimiento indígenas son encarnados por las estructuras de la modernidad que los marginan. El concepto de abismo, en lugar de confluencia, no es sociológicamente neutro entre sistemas de conocimiento locales y extra-

lingüísticos.[8] Al problematizar una supuesta división entre lo local y lo extralocal, el concepto de conocimiento indígena enturbia los vínculos, o incluso las identidades existentes entre los dos, y puede privilegiar a las autoridades políticas y burocráticas con intereses establecidos en la distinción (ya sea su mantenimiento o colapso).

Muchos estudiosos abogan por sustituir este concepto de una clara división por algo más complicado. Basándose en su trabajo con migrantes en el sureste de Nicaragua, Nygren (1999) propone sustituir la dicotomía percibida entre el conocimiento local y el universal por una concepción del conocimiento como heterogéneo, negociado e híbrido. Del mismo modo, Gupta (1998: 264-65), basándose en su trabajo en Uttar Pradesh, en el norte de India, sostiene que las "modernidades poscoloniales" se caracterizan por una "mezcla de hibridez, mala traducción e inconmensurabilidad". Los estudios históricos de cómo surgen esas contradicciones o inconmensurabilidades son quizá los más prometedores de todos, como el análisis de Ellen (1999) sobre las contradicciones internas en la visión nuaulu contemporánea del ambiente, que refleja los cambios recientes y continuos en sus relaciones ambientales.

Un importante foco de debate sobre los conocimientos indígenas tiene que ver con el tema de derechos de propiedad intelectual. El enfoque antropológico tradicional sobre el conocimiento de las plantas, junto con el desarrollo del interés por la conservación de la biodiversidad en general y las plantas con valor farmacéutico en particular, ha suscitado el interés por asignar derechos de propiedad intelectual orientados al mercado a los pueblos indígenas sobre los recursos biogenéticos (Brush y Stabinsky, 1996; Moran *et al*., 2001). Esto también representó una reacción contra una historia de libre apropiación de tales recursos, unida a patentes en los países occidentales y su posterior venta de vuelta a los pueblos indígenas en algunos de los casos más flagrantes. Sin embargo, el concepto de asignar derechos de propiedad intelectual a los pueblos indígenas resultó no ser tan sencillo como parecía. Antes sugerí que las

8 La división construida entre conocimiento indígena y no indígena es un ejemplo de lo que Foucault (1982) denomina "prácticas divisorias", refiriéndose a las muchas formas en que las sociedades cosifican al otro y privilegian el yo (por ejemplo, distinguiendo entre los locos y los cuerdos, los enfermos y los sanos, los criminales y los ciudadanos que cumplen la ley) (208).

premisas del concepto no eran sinceras respecto a las políticas nacionales y la marginalidad estructural de muchas comunidades indígenas (Dove, 1996). Brown (1998) también concluyó que los derechos de propiedad intelectual eran una forma inapropiada, romántica y políticamente ingenua de defender a las comunidades indígenas. Los intentos reales de desplegar los derechos de propiedad intelectual e implicar a las comunidades indígenas en asociaciones globales de bioprospección no han tenido mucho éxito. Greene (2004) analiza los problemas de un controvertido proyecto etnofarmacéutico del International Cooperative Biodiversity Group en la selva alta de Perú, y Berlin y Berlin (2004) describen con pesar el muy publicitado colapso de un proyecto de bioprospección en Chiapas, México, que subtitulan "Cómo fracasó un proyecto de bioprospección que debió haber sido exitoso".

La conservación ecológica de los pueblos indígenas

Gran parte del interés por los conocimientos indígenas se ha centrado en los recursos naturales y el ambiente, lo que se reflejó en la aparición del concepto de conocimiento ecológico indígena. La aparición de este concepto supuso una reacción a la proliferación histórica de discursos que en su mayoría culpaban de manera acrítica a las poblaciones locales de la degradación del ambiente. La mayoría de estos discursos se basaban en una visión neomalthusiana del crecimiento demográfico como responsable de agotar los recursos disponibles, una visión ahora muy criticada por ser demasiado simplista y, en particular, por ignorar los motores político-económicos generales. El campo de la ecología política se estableció, en parte, mediante la crítica de estos discursos de degradación, con ejemplos notables que incluyen la obra de Blaikie (1985) sobre los suelos, la obra de Fairhead y Leach (1996) sobre los bosques y la de Thompson *et al*. (1986) sobre el ecosistema del Himalaya.

Aunque esta corrección tenía cierta justicia histórica y validez empírica, el concepto de conocimiento ecológico indígena también era erróneo. Como escribió su defensor Berkes (1999), encarnaba tres mitos esencializados sobre los pueblos indígenas: el del otro exótico, el del bribón intruso y el del noble salvaje o ángel caído. En consecuencia, este concepto también

se convirtió en objeto de feroces debates. Casos icónicos de ecologismo indígena como el de los kayap'o de Brasil han sido objeto de duras críticas. El análisis de Posey (1985) de las islas forestales antropogénicas (*apete)* de los kayap'o fue una de las visiones más potentes del conocimiento y la gestión ambiental de pueblos indígenas jamás presentada. El geógrafo Parker (1992), sin embargo, rebatió que estas islas eran en realidad los productos naturales del avance y retroceso de la selva en los bordes de la sabana brasileña. Se desató un debate asimismo intenso a raíz de la publicación de Krech (1999), en la cual afirmaba que, aunque hay pruebas de que los nativos americanos poseían tanto conocimientos indígenas como una perspectiva ecológica del ambiente, no hay pruebas de que hayan conservado los recursos naturales de forma real e intencionada. De hecho, se inició un debate sobre si algún pueblo indígena del mundo había practicado alguna vez algo que pudiera llamarse propiamente conservación (Stearman, 1994). Una laguna evidente en estos debates es la falta de atención crítica a la traducción e interpretación transcultural del propio concepto de conservación, en especial en las sociedades no occidentales y fuera de las principales religiones del mundo. Estudios similares al de Tuck-Po (2004), que explora el concepto indígena de degradación ambiental entre los batek de Malasia peninsular, o West (2005), que compara las perspectivas émic y ético de las relaciones de los gimi con sus bosques en Papúa Nueva Guinea, son relativamente escasos.[9]

Para muchos estudiosos, la intención es el criterio clave de la presencia o la ausencia de conservación. Así, Stearman (1994) cuestiona la exactitud de las afirmaciones sobre la gestión de recursos a falta de una conciencia clara, y Smith y Wishnie (2000) afirman lo mismo, que la conservación debe ser un resultado intencional y no un subproducto involuntario. Sin embargo, muchos de los comportamientos que tiene el efecto de conservar los recursos naturales no es intencional (así como muchos de los comportamientos religiosos no constituyen religiosidad). Fairhead y Leach (1996: 285), en su reinterpretación pionera de la deforestación percibida en África Occidental, atribuyen la verdadera deforestación a "la suma de un conjunto de relaciones mucho más difusas,

9 West (2005: 632) aboga por situar la "política de la traducción" en el centro de la antropología ambiental.

una constelación más que una estructura". Escriben que "si bien los aldeanos precipitan intencionalmente estos cambios en la vegetación, su intervención no siempre es tan evidente. Las actividades agrícolas y cotidianas a corto plazo a veces pueden conducir de forma involuntaria a estos beneficiosos resultados de vegetación a largo plazo; los aldeanos conocen los resultados y los aprecian, pero no necesariamente trabajan por ellos". Fairhead y Leach (1996: 207). Aunque Posey, en su trabajo con los kayap'o, tal vez estuviera inclinado por razones políticas a exagerar la conciencia de sus prácticas de gestión de recursos, también reconoció que algunas prácticas con consecuencias importantes eran de tipo cotidiano e inconsciente. Resulta esclarecedor observar cómo las prácticas inconscientes se han transformado en la era moderna en conscientes, como hace Ellen (1999) en el caso de los nuaulu de Indonesia oriental. Distingue un sistema más antiguo, local y arraigado de conocimiento ecológico nuaulu, de un sistema más reciente de conocimiento de los procesos ambientales de orden superior, y lo hace en parte basándose en la autoconciencia.[10] En conjunto, estos estudios sugieren que cualquier división percibida entre la intención y la no intención en la gestión de los recursos es más bien un reflejo de la diferencia entre modernidad y premodernidad que entre las prácticas conservacionistas y no conservacionistas.

Conservación integrada y proyectos de desarrollo y reservas extractivas

El debate sobre la conservación indígena ha alcanzado su coyuntura más crítica en cuanto a proyectos integrados de conservación y desarrollo (PICD). El fracaso generalizado del enfoque tradicional de bardas y multas en la gestión de las áreas protegidas llevó a que la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente pidieran que se abandone la estricta separación de la conservación y el desarrollo humano a favor de una combi-

10 Estudios relacionados han observado cómo los pueblos indígenas, como parte de este proceso de desarrollo de un ecologismo consciente, han desplegado aseveraciones de una sabiduría ecológica indígena, de forma estratégica (Conklin y Graham, 1995; Li, 2000; Zerner, 1993).

nación de ambos en su Estrategia Mundial de Conservación de 1980.[11] Esto condujo a la proliferación mundial de los PICD, definidos por Wells (1992), que suelen comprometerse a elevar el nivel de vida de las comunidades situadas en las periferias o dentro de áreas protegidas, con la premisa de que este era el principal determinante de la presión sobre los recursos naturales. Sin embargo, los PICD resultaron complejos de ejecutar y a menudo fallaron en sus objetivos duales sociales y ambientales (véase Naughton-Treves *et al*., 2005 para una evaluación reciente). Los estudios en profundidad de la historia de proyectos específicos han sido escasos (para excepciones, véanse Neumann, 1997; Gezon, 1997; West, 2006). Con independencia del caso, este nuevo paradigma suscitó un agudo contraataque por parte de los conservacionistas que disputaban el principio básico de vincular el éxito de la conservación al desarrollo humano y exigían un regreso a la estrategia de la naturaleza como fortaleza (Oates, 1999; Redford y Sanderson, 2000; Terbourgh, 1999), lo que ayudó a impulsar un cambio a finales de la década de los noventa del nivel comunitario a las ecorregiones. Los defensores del principio básico de los PICD han respondido con la misma energía (Wilshusen *et al*., 2002). Holt (2005) señala que existe un círculo vicioso en el resurgimiento del paradigma proteccionista, en el sentido de que únicamente los grupos que carecen de tecnología, crecimiento demográfico y conexiones con el mercado se consideran favorables para la conservación, pero solo cuentan con incentivos para practicar la conservación los grupos que reúnen todas estas características.[12] Shepard (2006), basándose en la investigación a largo plazo en el Parque Nacional Manu en Perú, cuestiona la afirmación de que las comunidades locales no conservan los recursos, y Schwartzman *et al*. (2000) presentan un argumento político convincente de que la población local en realidad es la mejor defensa de los bosques tropicales

11 La historia de la separación de la sociedad y el ambiente en el manejo de áreas protegidas en Estados Unidos, que marcó la pauta para una gran parte del resto del mundo, se detalla en Spence (1999).

12 En un argumento relacionado, Fisher (1994) observa que la articulación de un apego ecomístico a la tierra por parte de los kayap'o solo era adecuada para una coyuntura político-económica específica en el tiempo.

frente a las amenazas de los sectores públicos y privados.[13]

Uno de los ejemplos más conocidos de PICD son las llamadas reservas extractivas del Amazonas, que se diseñaron para atender objetivos de conservación y desarrollo mediante la extracción sostenible y no invasiva de productos forestales (Allegretti, 1990; Schwartzman, 1989). Muy promocionadas, pero poco estudiadas (Ehringhaus, 2005),[14] pronto se vio que algunas de las comunidades indígenas implicadas consideraban que las reservas extractivas eran demasiado restrictivas y, en lugar de conservar sus bosques, empezaron a talarlos [como sucedió con los kayap'o (Turner, 1995)]. Zimmerman *et al*. (2001) informan de resultados un poco más optimistas de un proyecto de reserva extractiva de segunda generación, apoyado por Conservation International, que intenta ofrecer a los kayap'o mejores alternativas económicas para la tala.

Indigenidad, agencia, soberanía

Comunidad y Estado

Varios observadores han hecho comentarios sobre un cambio fundamental en el pensamiento de la antropología ambiental durante el último cuarto de siglo con respecto al estudio del poder, la política y la soberanía.[15] Brosius (1999a) sostiene, por tanto, que una discontinuidad importante entre la antropología ecológica de las décadas de los sesenta-setenta y la antropología ambiental actual es que esta última se basa en la teoría posestructuralista. Esta discontinuidad tal vez

13 A pesar del debate sobre los PICD, hoy en día existe una considerable convergencia entre los antropólogos ambientales y los científicos de la conservación, empezando por su compromiso mutuo con un paradigma de no equilibrio y un replanteamiento asociado de los conceptos simplistas de comunidad, naturaleza y cultura (cf. Scoones, 1999). Ambos campos comparten el interés por las perspectivas de gestión comunitaria de los recursos y el escepticismo respecto a las ventajas de la participación en el mercado; reexaminan la ignorada agencia de actores locales, tanto sociales como naturales, y afirman los méritos de una ciencia comprometida socialmente frente a una desvinculada.

14 Una evaluación reciente de Godoy *et al*. (2005) concluyó que los datos disponibles aún no permiten extraer conclusiones definitivas sobre el impacto de las reservas extractivas sobre el bienestar de las comunidades indígenas, ni sobre el éxito de sus prácticas de conservación de los recursos.

15 Agrawal (2005b) sostiene que la bibliografía sobre lo indígena sigue estando marcada por la ausencia de cualquier teoría del poder.

se refleje en la distinción entre el análisis de Posey (1985) de las islas forestales en el Amazonas, que comenzó a finales de los setenta y el análisis de Fairhead y Leach (1996) sobre las islas forestales en África Occidental, realizado a principios de los noventa (Dove y Carpenter, 2006). Ambos estudios corrigen la idea de que las islas forestales son restos de bosque natural, pero mientras que Posey hace hincapié en la corrección, Fairhead y Leach destacan el error. Posey subraya la importancia política del conocimiento ecológico indígena para los responsables de las políticas, mientras que Fairhead y Leach lo hacen en la importancia para los académicos de estudiar las políticas del conocimiento esquivo de los responsables de las políticas.

El nuevo paradigma se refleja en el replanteamiento posestructural motivado de la hegemonía del Estado, ejemplificado en el reciente conjunto de ensayos publicados en *American Anthropologist* sobre la obra de James C. Scott (Sivaramakrishnan, 2005). Una evolución complementaria es un mayor interés por la agencia de los pueblos y las comunidades locales (Brosius, 1999a; 1999c) definida como "la capacidad de actuar mediada socioculturalmente" (Ahearn, 2001: 112). Académicos como Li (2000) han estudiado el modo en que se ejerce la agencia en la articulación de lo indígena que, según ella, abre un margen de maniobra que de otro modo no estaría disponible, aunque algunos de los elementos empleados en esta articulación estén esencializados. Li (2000: 163) escribe: "La narración de esta historia [de lo indígena] con relación con Lindu o cualquier otro lugar de Indonesia debe considerarse un logro, un resultado contingente del trabajo cultural y político de articulación por medio del cual se explicitaron la identidad y el conocimiento indígenas, se formaron alianzas y la atención de los medios de comunicación se enfocó de la forma apropiada".

Uno de los lugares en los que por tradición se percibía la agencia, la comunidad local, es cada vez más problemático. Muchos antropólogos han contribuido a una visión revisionista de la comunidad mucho menos homogénea, armoniosa e integrada, y mucho más contingente históricamente de lo que se creía. En su escrito sobre los sistemas de regadío del sur de India, por ejemplo, Mosse (1997: 417) sostiene, de manera contraintuitiva, que los antiguos sistemas sociales supralocales en realidad han sido sustituidos recientemente por otros más localizados debido a las exigencias del Estado moderno:

> Las nuevas teorías de 'gestión comunitaria' que hacen hincapié en las instituciones comunitarias autónomas, sostenidas internamente y autosuficientes, han surgido dentro de un discurso global (político y práctico) orientado a encontrar soluciones comunitarias a los problemas percibidos de la gestión estatal y de mercado del regadío; soluciones capaces de abordar los imperativos políticos de reparto de costes, recuperación y reducir la responsabilidad financiera del Estado.

El discurso global hegemónico de la gestión comunitaria de los recursos naturales (GCRN), que contribuyó a promover el desarrollo de este concepto de comunidad, se ve socavado por su endeble base empírica. Los problemas y perspectivas de la GCRN son revisados por Agrawal y Gibson (2001) y Brosius *et al*. (2005). Leach *et al*. (1999), basándose en un estudio global comparativo, critican la premisa de una comunidad consensual en la GCRN, y Berry (2004), analizando casos en África, sostiene que el proceso GCRN de decidir quién y qué es local crea más problemas de los que resuelve.

Uno de los casos más debatidos de identidad comunitaria y autonomía es el de los san del Kalahari, que durante mucho tiempo se consideraron un caso emblemático de pueblo indígena aislado y atemporal, una opinión ahora en revisión y debate. El revisionista más influyente, Wilmsen (1989), sostiene que los san se integraron en economías capitalistas modernas en lo material, ya que la administración colonial británica reforzó el sistema tributario de los tswanas, que extraía excedentes de los san, y también estaban integrados discursivamente de una forma que ocultó su verdadera historia (Sylvain, 2002). En réplica, Solway y Lee (1990) sostienen que, aunque algunos san dependían de los no san, otros eran, si no aislados y atemporales, al menos sustancialmente autónomos y se resistían de forma activa a incorporarse al capitalismo mundial.[16]

16 Un debate análogo, conocido como el debate del ñame silvestre, se centró sobre si estos y otros tubérculos constituían una fuente suficiente de carbohidratos silvestres para mantener a la gente con los bosques tropicales, sin vínculos ni dependencias extra forestales (Headland y Bailey, 1991; McKey, 1996).

Colaboración

Muchos académicos han intentado ir más allá del concepto de resistencia local, como se ve en la obra de Scott (1985; 1989) (que a su vez fue una contribución temprana y fundamental al estudio de la agencia). Algunos consideraron que Scott es demasiado optimista en su evaluación de las posibilidades de resistencia local, mientras que otros consideraron que no fue lo bastante optimista y que las comunidades locales no se limitaron a resistirse a los poderosos actores externos a la comunidad, sino que también colaboraron con ellos de formas más complejas de lo que se había imaginado. Por ejemplo, apartándose de una larga historia de estudios sobre la oposición entre los departamentos forestales y los pueblos indígenas, Mathews (2005) y Vasan (2002) analizan las formas cotidianas en que silvicultores y agricultores se llevan bien en beneficio mutuo. Otros, adoptando una visión foucaultiana de las relaciones de poder descentradas y la formación de sujetos, son más negativos. Por ejemplo, Agrawal (2005a) sugiere que la tan alabada concesión de derechos forestales a los aldeanos en India es en realidad una forma de convertirlos en sujetos ambientales.

La colaboración y la complicidad se distinguen de la participación en esta descripción. A medida que ha crecido el interés por revelar los patrones informales de colaboración, también lo ha hecho la crítica de las estructuras formales de desarrollo de la participación. En el último cuarto de siglo, se ha producido un cambio discursivo de desarrollo mundial hacia la participación de las comunidades indígenas en su propio desarrollo, lo cual se refleja en la aparición de técnicas de investigación supuestamente más participativas (por ejemplo, el avalúo rural participativo y el mapeo local), así como la GCRN (ya comentada).[17] Pero los críticos han cuestionado hasta qué punto estas medidas son participativas en verdad (Mosse, 1994). Trantafillou y Nielsen (2001), por ejemplo, sostienen que el empoderamiento participativo simplemente conduce a una mayor confusión en las relaciones de poder.

17 Compárese con el análisis de Rademacher & Patel (2002) de la génesis política del auge del paradigma participativo.

Gran parte de los estudios sobre colaboración se ha centrado en las relaciones entre las comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales (ONG). Tsing (1999: 162) se muestra esperanzada sobre las perspectivas de estas colaboraciones y escribe que "ofrecen posibilidades de construir la justicia ambiental y social en el campo, tan emocionantes como cualquiera de las que he oído hablar". Otros, como Conklin y Graham (1995), quienes también han estudiado el cambiante terreno intermedio entre las ONG y los pueblos indígenas, hacen algo más de hincapié en su inseguridad. La capacidad de las ONG internacionales más antiguas y poderosas de beneficiar a los pueblos indígenas ha sido cuestionada en particular. Chapin (2004) y Bray y Anderson (2005) desataron una tormenta de debate al afirmar que varias de las principales ONG ambientalistas del mundo ya no eran defensoras de los derechos indígenas (si es que alguna vez lo habían sido). En su estudio de caso sobre la pesca en la Amazonia central de Brasil, Chernela (2005) se basa en esta crítica argumentando que el problema es un cambio más sutil, pero asimismo problemático, en el papel de las ONG de la mediación a la dominación y de la asociación local, a la producción local.

Movimientos por los derechos indígenas

La expresión de la agencia en los movimientos por los derechos indígenas ha despertado un gran interés para los antropólogos. Jackson y Warren (2005) han revisado la bibliografía sobre estos movimientos en América Latina, y Hodgson (2002) ha revisado la bibliografía sobre África y América. Entre los casos bien estudiados figuran el movimiento Chipko (Rangan, 1992), la presa de Narmada (Baviskar, 1995), los zapatistas (Jung, 2003; Nugent, 1995), y los caucheros de Brasil (Allegretti, 1990; Ehringhaus, 2005; Keck, 1995). También ha habido un gran interés por las relaciones de estos movimientos con las ONG extralocales, como demuestra el estudio de Brosius (1999a; 1999c) sobre los bloqueos madereros de los penanes en Sarawak. Brosius se interesó por las implicaciones que estas relaciones tienen para la gubernamentalidad. Escribe que, en la medida que las ONG ecologistas desplazan a los movimientos ecologistas de base, "podrían ser vistos como comprometidos en proyectos de domesticación, intentando

seducir u obligar" a los grupos de base "a participar en proyectos estatistas de gubernamentalidad medioambiental", proyectos que envuelven a los movimientos "dentro de instituciones de vigilancia y gobernanza ambiental local, nacional y global" (Brosius, 1999b: 37, 50).[18]

Como complemento al interés por los movimientos sociales, ha surgido un nuevo interés en el estudio de la violencia que afecta a los pueblos indígenas. Un foco prominente de los académicos sobre este tema ha sido lo que Richards (1996: 13) denomina la nueva barbarie o la interpretación Malthus-con pistolas de la violencia tribal en términos de poblaciones descontroladas / presión sobre los recursos (Homer-Dixon, 1999; Kaplan, 1994). Esta interpretación ha suscitado una dura refutación por parte de antropólogos que sostienen, en primer lugar, que es más probable que la violencia provoque la degradación de los recursos locales y el empobrecimiento de las poblaciones locales que lo contrario y, en segundo lugar, que las fuerzas políticas-económicas extralocales —que a menudo implican a países occidentales industrializados— con frecuencia se hallan implicadas en las causas de dicha violencia (Fairhead, 2001; Richards, 1996). Varios participantes en este debate han defendido la necesidad de articular concepciones émic de la violencia (Fairhead, 2001; Harwell y Peluso, 2001). He analizado la discontinuidad en Kalimantan, Indonesia, entre las explicaciones académicas de la violencia étnica en términos de economía política y las explicaciones indígenas en términos de cultura (Dove, 2006).

Los pueblos indígenas y la antropología

Problemas

El estudio de los movimientos indígenas y la violencia, los derechos y conocimientos indígenas sobre los recursos y del despliegue de la condición y la identidad indígenas plantean preguntas sobre la política y la ética de la investigación. Que los temas de interés antropológico se hayan convertido en las

18 Compárese con el análisis de Escobar y Paulson (2005) sobre la discontinuidad entre los discursos dominantes sobre la biodiversidad y la ecología política de los movimientos sociales.

herramientas con que los pueblos indígenas articulan sus identidades, reclaman recursos locales y luchan por sus derechos en los ámbitos regional, nacional e internacional plantea retos morales y éticos a los antropólogos que requieren nuevas respuestas. Como señala Brosius (1999c: 368), "salvo unas pocas excepciones, los antropólogos aún no han abordado seriamente las implicaciones políticas de la diferencia entre mapear la vida de un pueblo […] y mapear los contornos de un movimiento social". El debate sobre estas implicaciones revela que ya se ha dado un cambio completo dentro de la disciplina en relación con la mezcla de moralidad y ciencia. El debate sobre el artículo de Kuper (2003) acerca de la indigeneidad, por ejemplo, reveló que la simple negación de la política y la insistencia en la distancia se han convertido en una postura minoritaria, mientras que cada vez es más frecuente un posicionamiento moral explícito y subjetivo. Kottak (1999) sostiene que los antropólogos son testigos de amenazas a sus sujetos, lo que impone una responsabilidad moral, y Hodgson (2002) señala que la topografía desigual del poder en el mundo hace que la representación neutral sea imposible por parte de los antropólogos.

Una consecuencia de este posicionamiento moral es el rechazo etnográfico, que es tan poco debatido como habitual. Ortner (1995) acuñó este término para referirse a la negativa de los etnógrafos a escribir con detalle sobre los propios puntos de vista de los sujetos en casos de resistencia. Este rechazo es en especial marcado con respecto al comportamiento que viola las normas políticas de la mayoría de los antropólogos, incluida la violencia y los prejuicios por motivos de etnia, género, casta, clase, religión y raza. Es aún más complicado cuando lo que está sobre la mesa no es solo un comportamiento considerado políticamente incorrecto, sino las representaciones de un comportamiento (como en algunos de los despliegues de la condición indígena) considerado políticamente carente. En palabras de Li (2002: 364): "¿Qué significa para los académicos generar conocimientos destinados a contrarrestar las interpretaciones enmarcadas en términos étnicos o religiosos, cuando no son generadas por personas equivocadas ajenas a la causa (medios de comunicación, académicos o políticos que ponen el foco en identidades primordiales y rituales tribales exóticos), sino por la experiencia "indígena" cotidiana?". Ortner (1995: 190) atribuye el rechazo etnográfico, en parte, a una "falta de nervio en torno a cuestiones de política interna de los grupos dominados". No solo resulta de la "delgadez etnográfica",

sino que también refleja una falta de respeto por la comprensión de los pueblos de sus propios motivos (Baviskar, 1996).

Perspectivas

Las implicaciones de la crítica académica son cada vez más complejas. Así, Latour (2004) apoya un giro de la academia crítica que desacredita hechos a una aceptación de la realidad de los temas de interés, utilizando el calentamiento global como ejemplo. Escribe: "En dado caso, el peligro ya no vendría de una confianza excesiva en argumentos ideológicos que se presentan como hechos —como hemos aprendido a combatir tan eficientemente en el pasado—, ¡sino de una excesiva *desconfianza* de buenos hechos disfrazados de malos prejuicios ideológicos!" (2004: 227). A Latour le preocupa el hecho de que los actores políticos que saquean el ambiente tomen prestadas las herramientas de la deconstrucción académica para atacar la tesis del calentamiento global. Potencialmente preocupante por la misma razón es la coincidencia del interés popular en lo indígena y su crítica académica, lo que plantea preguntas sobre cómo el borramiento de la localidad por parte de la antropología se relaciona con el auge de los derechos indígenas (y, en términos más generales, qué papel desempeña la tendencia descontextualizadora del mundo académico en el proyecto más amplio de descontextualización de la modernidad).

La doble hermenéutica de Giddens (1984) describe un tipo de proceso de retroalimentación similar. Para la antropología ambiental, sin embargo, estas teorías se complican con la incorporación del ambiente como agente activo. La ciencia, la sociedad y el ambiente (co)evolucionan de forma clara. Así lo demuestra, por ejemplo, lo que sabemos de los kayap'o desde hace una generación. Su entorno y sus regímenes de gestión, su identidad y sus modos de representarla, así como las interpretaciones académicas de todo ello, todo ha cambiado en un proceso de influencia mutua y evolución constante, que presenta un sinfín de contradicciones en cualquier momento dado. Vemos este mismo tipo de contradicciones entre los nuaulu, que se convirtieron en un pueblo de la naturaleza precisamente a medida que se distanciaban más de ella (Ellen, 1999). Hay muchos otros ejemplos en los

que la modernidad facilita la articulación de lo indígena y la conservación indígena al mismo tiempo que hace imposible su consecución real. Estas contradicciones deberían ser el enfoque futuro de la antropología ambiental o, dicho de otro modo, una comprensión de la coevolución de la ciencia, la sociedad y el ambiente que demuestre por qué en realidad no son contradicciones, debería ser el objetivo futuro de la antropología del ambiente.

Reconocimientos

Agradezco a Carol Carpenter una serie de ideas que han contribuido a este ensayo, así como a los alumnos del seminario avanzado que impartimos conjuntamente en Yale, "La ciencia social del desarrollo y la conservación", en el que se presentó una versión anterior de esta reseña. También doy las gracias a Caroline Simmonds, mi indómita becaria de investigación de los últimos dos años, y a mi incondicional secretaria, Ann Prokop. No obstante, ninguna de las personas o instituciones mencionadas es responsable del contenido de este ensayo, cuyos defectos son solo míos.

Referencias[19]

Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change 26(3)*, 413-439.

Agrawal, A. (2005a). Environmentality: community, intimate government, and the making of environmental subjects in Kumaon, India. *Current Anthropology*, *46*(2), 161-190.

Agrawal, A. (2005b). Indigenous knowledge/power [ponencia en *Agrarian Stud. Colloq.*, 2 de diciembre, Yale University].

19 N. de T. Algunas referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias difieren de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Agrawal, A. y C. C. Gibson (eds.). (2001). *Communities and the environment: ethnicity, gender, and the state in community-based conservation*. Rutgers University Press.

Ahearn, L. M. (2001). Language and agency. *Annual Review of Anthropology*, *30*, 109-138.

Allegretti M. H. (1990). Extractive reserves: an alternative for reconciling development and environmental conservation in Amazonia. En A. B. Anderson (ed.). *Alternatives to deforestation: steps toward sustainable use of the Amazonia rain forest* (252-264). Columbia University Press

Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: cultural dimensions of globalization*. University of Minneapolis Press.

Baviskar, A. (1995). *In the belly of the river: tribal conflicts over development in the Narmada Valley*. Oxford University Press.

Baviskar, A. (1996). Reverence is not enough: ecological Marxism and Indian adivasis. En E. M. DuPuis y P. Vandergeest (eds.). *Creating the countryside: the politics of rural and environmental discourse* (204-224). Temple University Press

Benjamin, G. (2002). On being tribal in the Malay world. En G. Benjamin y C. Chou (eds.). *Tribal communities in the Malay world: historical, cultural, and social perspectives* (7-76). International Institute for Asian Studies / Institute of Southeast Asian Studies.

Berkes, F. (1999). *Sacred ecology: traditional ecological knowledge and resource management*. Taylor & Francis.

Berlin, B. y E. A. Berlin. (2004). Community autonomy and the Maya ICBG project in Chiapas, Mexico: how a bioprospecting project that should have succeeded failed. *Human Organization*, *63*(4), 472-486.

Berry, S. (2004). Reinventing the local? Privatization, decentralization and the politics of resource management: examples from Africa. *African Study Monographs*, *25*(2), 79-101.

Béteille, A. (1998). The idea of indigenous people. *Current Anthropology*, *39*(2), 187-191.

Blaikie, P. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries*. Longman

Bray, D. y A. B. Anderson. (2005). *Global conservation, non-governmental organizations, and local communities*. Working Paper. No. 1, Conservation and Development Series. Institute for the Study of Sustainable Development in Latin America and the Caribbean, Florida International University.

Brokensha D., D. M. Warren y O. Werner (eds.). (1980). *Indigenous knowledge systems and development*. University Press of America.

Brondizio, E. S. (2004). Agriculture intensification, economic identity, and shared invisibility in Amazonian peasantry: caboclos and colonists in comparative perspective. *Culture & Agriculture, 26*(1-2), 1-24.

Brosius, J. P. (1999a). Analyses and interventions: anthropological engagements with environmentalism. *Current Anthropology, 40*(3), 277-309.

Brosius, J. P. (1999b). Green dots, pink hearts: displacing politics from the Malaysian rain forest. *American Anthropologist*, *101*(1), 36-57.

Brosius, J. P. (1999c). Locations and representations: writing in the political present in Sarawak, East Malaysia. *Identities. 6*(2-3), 345-386.

Brosius, J. P., A. L. Tsing y C. Zerner (eds.). (2005). *Communities and conservation: history and politics of community-based natural resource management*. AltaMira Press.

Brown, M. F. (1998). Can culture be copyrighted? *Current Anthropology*, *39*(2), 193-222.

Brush, S.B. y D. Stabinsky (eds.). (1996). *Valuing local knowledge: indigenous people and intellectual property rights*. Island Press.

Campos, M. T., y Nepstad, D. C. (2006). Smallholders, the Amazon's new conservationists. *Conservation Biology*, 20(5), 1553–1556. https://www.jstor.org/stable/3879149

Chapin, M. (2004). A challenge to conservationists. *World Watch* (noviembre-dicimbre), 17-31.

Chernela, J. (2005). The politics of mediation: local-global interactions in the Central Amazon of Brazil. *American Anthropologist*, *107*(4), 620-631.

Clifford, J. (1988). *The predicament of culture.* Harvard University Press.

Clifford, J. (2001). Indigenous articulations. *The Contemporary Pacific*, *13*(2), 468-490.

Conklin, B. A. (1997). Body paint, feathers, and VCRs: aesthetics and authenticity in Amazonian activism. *American Ethnologist*, *24*(4), 711-737.

Conklin, B. A. (2002). Shamans versus pirates in the Amazonian treasure chest. *American Anthropologist*, *104*(4), 1050-1061.

Conklin, B. A y L. R. Graham. (1995). The shifting middle ground: Amazonian indians and eco politics. *American Anthropologist*, *97*(4), 215-229.

Dove, M. R. (1996). Center, periphery and bio-diversity: a paradox of governance and a developmental challenge. En S. Brush y D. Stabinsky (eds.). *Valuing local knowledge: indigenous people and intellectual property rights* (41-67). Island Press.

Dove, M. R. (2000). The life-cycle of indigenous knowledge, and the case of natural rubber production. En F. F. Allen, A. Bicker y P. Parkes (eds). *Indigenous environmental knowledge and its transformations* (213-251). Harwood.

Dove, M. R. (2006). 'New barbarism' or 'old agency' among the Dayak? Reflections on post-Suharto ethnic violence in Kalimantan. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, 50(1), 192–202.

Dove, M. R. y C. Carpenter (eds.). (2006). *Environmental anthropology: an historical reader*. Blackwell.

Ehringhaus, C. (2005). *Post-victory dilemmas: land use, development policies, and social movement in Amazonian extractive reserves* [tesis de doctorado, Yale University].

Ellen, R. F. (1999). Forest knowledge, forest transformation: political contingency, historical ecology and the renegotiation of nature in Central Seram. En T. M. Li (ed.). *Transforming the Indonesian uplands* (pp. 131-157). Harwood

Ellen, R. F. y P. Harris. (2000). (ed.). Introduction. En R. F. Ellen, A. Bicker y P. Parkes (ed.). *Indigenous environmental knowledge and its transformations* (213-251). Harwood.

Escobar, A. y S. Paulson. (2005). The emergence of collective ethnic identities and alternative political ecologies in the Columbian rainforest. En S. Paulson y L. Gezon (eds.). *Political ecology across spaces, scales and social groups* (257-277). Rutgers University Press.

Fairhead, J. (2001). International dimensions of conflict over natural and environmental resources. En N. L. Peluso y M. Watts (eds.). *Violent environments* (213-236). Cornell University Press.

Fairhead, J. y M. Leach. (1996). *Misreading the African landscape: society and ecology in forest- savanna mosaic*. Cambridge University Press.

Fisher, W. H. (1994). Megadevelopment, environmentalism, and resistance: the institutional context of Kayapo indigenous politics in Brazil. *Human Organization*, *53*(3), 220-232.

Foucault, M. (1982). Afterword: the subject and power. En H. Dreyfus y P. Rabinow (eds.). *Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics* (208-226). University of Chicago Press.

Gezon, L. (1997). Institutional structure and the effectiveness of integrated conservation and development projects: case study from Madagascar. *Human Organization*, *56*(4), 462-470.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: outline of the theory of structuration*. University of California Press.

Godoy, R., V. Reyes-Garcia, E. Byron, W. R. Leonard y V. Valdez. (2005). The effects of market economies on the well-being of indigenous peoples and their use of renewable natural resources. *Annual Review of Anthropology*, *34*, 121-138.

Graham, L. R. (2005). Image and instrumentality in a Xavante politics of existential recognition. *American Ethnologist*, *32*(4), 622-641.

Greene, S. (2004). Indigenous people incorporated? Culture as politics, culture as property in pharmaceutical bioprospecting. *Current Anthropology*, *45*(2), 211-237.

Gupta, A. (1998). *Postcolonial developments: agriculture in the making of modern India*. Duke University Press.

Harwell, E. y N. Peluso. (2001). The ethnic violence in West Kalimantan. En N. Peluso y M. Watts (eds.). *Violent environments* (83-116). Cornell University Press.

Headland, T. N. y R. C. Bailey. (1991). Introduction: Have hunter-gatherers ever lived in tropical rain forest independently of agriculture? *Human Ecology*, *19*(2), 115-1122.

Hirtz, F. (2003). It takes modern means to be traditional: on recognizing indigenous cultural communities in the Philippines. *Development and Change*, *34*(5), 887-914.

Hobsbawm, E. y T. Ranger (eds.). (1983). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.

Hodgson, D. L. (2002). Introduction: comparative perspectives on the indigenous rights movement in Africa and the Americas. *American Anthropologist*, *104*(4),1037-1049.

Holt, F. L. (2005). The catch-22 of conservation: indigenous peoples, biologists, and cultural change. *Human Ecology*, *33*(2), 199-215.

Homer-Dixon, T. F. (1999). *Environment, scarcity, and violence*. Princeton University Press.

Hornborg, A. (1996). Ecology as semiotics: outlines of a contextualist paradigm for human ecology. En P. Desola y G. Palsson (eds.). *Nature and society: anthropological perspectives* (45-62). Routledge.

Hornborg, A. (2005). Undermining modernity: protecting landscapes and meanings among the Mi'kmaq of Nova Scotia. En S. Paulson y L. Gezon (eds.). *Political ecology across spaces, scales and social groups* (196-214). Rutgers University Press.

International Labour Organization. (1989). Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169

Jackson, J. E. (1995). Culture, genuine and spurious: the politics of Indianness in the Vaupes, Columbia. *American Ethnologist*, *22*(1), 3-27.

Jackson, J. E. 1999. The politics of ethnographic practice in the Columbian Vaupes. *Identities*, *6*(2-3), 281-317.

Jackson, J. E y K. B. Warren. (2005). Indigenous movements in Latin America, 1992-2004: controversies, ironies, new directions. *Annual Review of Anthropology*, *34*, 549-573.

Jung C. (2003). The politics of indigenous identity: neoliberalism, cultural rights, and the Mexican Zapatistas. *Social Research*, *70*(2), 433-462.

Kaplan, R. D. (1994). The coming anarchy: how scarcity, crime, overpopulation, and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet. *The Atlantic Monthly*, (febrero), 44-76.

Keck M. E. (1995). Social equity and environmental politics in Brazil: lessons from the rubber tappers of Acre. *Comparative Politics*, *27*, 409-424.

Kottak, C. (1999). The new ecological anthropology. *American Anthropologist*, *101*(1), 23-35.

Krech, S., III. (1999). *The ecological indian: myth and history*. Norton.

Kuper, A. (2003). The return of the native. *Current Anthropology*, *44*, 389-402.

Latour, B. (2004). Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern. *Critical Inquiry*, *30*, 225-248.

Leach, M., R. Mearns e I. Scoones. (1999). Environmental entitlements: dynamics and institutions in community-based natural resource management. *World Development*, *27*(2), 225-247.

Li, T. M. (2000). Articulating indigenous identity in Indonesia: resource politics and the tribal slot. *Comparative Studies in Society and History*, *42*(1), 149-179.

Li, T. M. (2002). Ethnic cleansing, recursive knowledge, and the dilemma of sedentarism. *International Social Science Journal*, *173*, 361-371.

Linnekin, J. (1992). On the theory and politics of cultural construction in the Pacific. *Oceania*, *62*, 249-263.

Mathews, A. S. (2005). Power/knowledge, power/ignorance: forest fires and the state in Mexico. *Human Ecology*, *33*(6), 795-820.

McKey, D. B. (1996). Wild yam question. En D. Levinson y M. Embers (eds.). *Encyclopedia of Cultural Anthropology* (vol. 4, 1363-1366). Henry Holt.

Moran, K., S. R. King y T. J. Carlson. (2001). Biodiversity prospecting. *Annual Review of Anthropology*, *30*, 505-526.

Mosse, D. (1994). Authority, gender and knowledge: theoretical reflections on the practice of participatory rural appraisal. *Development and Change*, *25*, 497-526.

Mosse, D. (1997). The symbolic making of a common property resource: history, ecology, and locality in a tank-irrigated landscape in south India. *Development and Change*, *28*, 467-504.

Naughton-Treves, L., M. B. Holland y K. Brandon. (2005). The role of protected areas in conserving biodiversity and sustaining local livelihoods. *Annual Review of Environment and Resources*, *30*, 219-252.

Nazarea, V. (ed.). (1999). *Ethnoecology: situated knowledge/local lives*. University Arizona Press.

Neumann, R. P. (1997). Primitive ideas: protected area buffer zones and the politics of land in Africa. *Development and Change*, *28*, 559-582.

Niezen, R. (2003). *The origins of indigenism: human rights and the politics of identity*. University of California Press.

Nugent, D. (1995). Northern intellectuals and the EZLN. *Monthly Review*, *47*(3), 124-138.

Nygren, A. (1999). Local knowledge in the environment-development discourse: from dichotomies to situated knowledge. *Critique of Anthropology*, *19*(3), 267-288.

Oakdale, S. (2004). The culture-conscious Brazilian Indian: representing and reworking Indian ness in Kayabi political discourse. *American Ethnologist*, *31*(1), 60-75.

Oates, J. F. (1999). *Myth and reality in the rain forest: how conservation strategies are failing in West Africa*. University of California Press.

Ortner, S. (1995). Resistance and the problem of ethnographic refusal. *Comparative Studies in Society and History*, *37*(1), 173-193.

Parker, E. (1992). Forest islands and Kayapo resource management in Amazonia: a reappraisal of the Apete. *American Anthropologist*, *94*(2), 406-428.

Posey, D. A. (1985). Indigenous management of tropical forest ecosystems: the case of the Kayapo indians of the Brazilian Amazon. *Agroforestry Systems*, *3*, 139-158.

Pulido, L. 1998. Ecological legitimacy and cultural essentialism. En D. Faber (ed.). *The struggle for ecological democracy: environmental justice in the United States* (293-311). Guilford.

Rademacher, A. (2005). *Culturing urban ecology: development, statemaking, and river restoration in Kathmandu* [tesis de doctorado, Yale University].

Rademacher, A. y R. Patel. (2002). Retelling worlds of poverty: reflections on transforming participatory research for a global narrative. En

K. Brock y R. McGee (eds.). *Knowing poverty: critical reflections on participatory research and policy* (166–188). Earthscan.

Rangan, H. (1992). Romancing the environment: popular environmental action in the Garhwal Himalayas. En J. Friedmann y H. Rangan (eds.). *Defense of livelihoods: comparative studies in environmental action* (155-181). Kumarian

Redford K. y Sanderson SE. (2000). Extracting humans from nature. *Conservation Biology*, *14*, 1362-1364.

Richards, P. (1996). *Fighting for the rain forest: War, youth and resources in Sierra Leone*. Oxford: International African Institute.

Schwartzman, S. (1989). Extractive reserves: the rubber tappers' strategy for sustainable use of the Amazon rain forest. En J. O. Browder (ed.). *Fragile lands in Latin America: strategies for sustainable development* (150-165). Westview Press.

Schwartzman S., A. Moreira y D. Nepstad. 2000. Rethinking tropical forest conservation: perils in parks. Perils in parks. *Conservation Biology*, *14*(5), 1351-1357.

Scoones, I. (1999). New ecology and the social sciences: what prospects for a fruitful engagement? *Annual Review of Anthropology*, *28*, 479-507.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Scott, J. C. (1989). *Domination and the arts of resistance: hidden transcripts*. Yale University Press.

Shepard, G. H. J. (2006). Trouble in paradise: indigenous populations and biodiversity conservation in Manu National Park, Peru. *Journal of Sustainable Forestry*, 29, 252–301.

Sillitoe, P. (1998). The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. *Current Anthropology*, *39*(3), 223-252.

Sillitoe, P., A. Bicker y J. Pottier. (2002). *Participating in development: approaches to indigenous knowledge*. Routledge.

Sivaramakrishnan, K. (2005). Introduction to "moral economies, state spaces, and categorical violence". *American Anthropologist*, *107*(3), 321-330.

Smith, E.A. y M. Wishnie. 2000. Conservation and subsistence in small-scale societies. *Annual Review of Anthropology*, *29*, 493-524.

Solway, J. S. y R. B. Lee. (1990). Foragers, genuine or spurious? Situating the Kalahari San in history. *Current Anthropology*, *33*(1), 187-224.

Spence, M. D. (1999). *Dispossessing the wilderness: indian removal and the making of the national parks*. Oxford University Press.

Stearman, A. M. (1994). "Only slaves climb trees": revisiting the myth of the ecologically noble savage in Amazonia. Amazonia. *Human Nature*, *5*(4), 339-357.

Sylvain, R. (2002). Land, water, and truth: San identity and global indigenism. *American Anthropologist*, *104*(4), 1074-1085.

Terborgh, J. (1999). *Requiem for nature*. Island Press.

Thompson, M., M. Warburton y T. Hatley. 1986. *Uncertainty on a Himalayan scale: an institutional theory of environmental perception and a strategic framework for the sustainable development of the Himalaya*. Ethnographica.

Trantafillou, P. y M. R. Nielsen. (2001). Policing empowerment: the making of capable subjects. *History of the Human Sciences*, *14*(2), 63-86.

Tsing A. L. (1999). Becoming a tribal elder and other green development fantasies. En T. M. Li (ed.). *Transforming the Indonesian uplands: marginality, power and production* (159-202). Berg.

Tsing, A. L. (2003). Agrarian allegory and global futures. En P. Greenough y A. L. Tsing (eds). *Nature in the global South: environmental projects in South and Southeast Asia* (124-169). Duke University Press.

Tuck-Po, L. (2004). *Changing pathways: forest degradation and the Batek of Pahang, Malaysia*. Lexington Books.

Turner, T. S. (1995). An indigenous people's struggle for socially equitable and ecologically sustainable production: the Kayapo revolt against extractivism. J. *Journal of Latin American Anthropology, 1*, 98-121.

Vasan, S. (2002). Ethnography of the forest guard: contrasting discourses, conflicting roles and policy implementation. *Economic and Political Weekly*, *37*(40), 4125-4133.

Wells, B. K. (1992). People and parks: linking protected area management with local communities. World Bank.

West, P. (2005). Translation, value, and space: theorizing an ethnographic and engaged environmental anthropology. *American Anthropologist*, *107*(4), 632-642.

West, P. (2006). *Conservation is our government now: the politics of ecology in Papua New Guinea*. Duke University Press.

Wilmsen, E. N. (1989). *Land filled with flies: a political economy of the Kalahari*. University of Chicago Press.

Wilshusen, P. R., S. R. Brechin, C. L. Fortwangler y P. C. West. (2002). Reinventing a square wheel: critique of a resurgent "protecting paradigm" in international biodiversity conservation. *Society & Natural Resources*, *15*, 17-40.

Wolf, E. R. (1982). *Europe and the people without history*. University of California Press.

Zerner, C. (1993). Through a green lens: the construction of customary environmental law and community in Indonesia's Maluku Islands. *Law & Society Review*, *28*(5), 1079-1122.

Zimmerman B., C. A. Peres, J. R. Malcolm y T. Turner. (2001). Conservation and development alliances with the Kayapo of south-eastern Amazonia, a tropical forest indigenous people. *Environmental Conservation*, *28*(1), 10-22.

25. Incorporando el conocimiento y el comportamiento locales de los pescadores a los sistemas de información geográfica (SIG) para el diseño de las áreas marinas protegidas en Oceanía[1]

Shankar Aswani y Matthew Lauer

Resumen: Partiendo de nuestra experiencia en el establecimiento de áreas marinas protegidas (AMP) en las lagunas de Roviana y Vonavona, en Nueva Georgia (Islas Salomón), este artículo muestra cómo puede utilizarse una base de datos de un sistema de información geográfica (SIG) para incorporar información socioespacial, como datos sobre conocimientos indígenas y pesca artesanal, junto con información biofísica y de otro tipo, para apoyar en el diseño de las AMP. Argumentamos que convertir los conocimientos y el comportamiento socioecológico de los pueblos en datos geoespaciales permite a los investigadores formular hipótesis sobre las respuestas humanas a la variabilidad inter e intrahábitat, junto con otros procesos ecológicos marinos, y ayuda a diseñar y emprender estrategias de gestión de recursos de forma participativa y rentable, salvando la distancia entre las concepciones indígenas y occidentales de los paisajes marinos. En términos más generales, mostramos la importancia de combinar herramientas espaciales, trabajo de campo antropológico y métodos de las ciencias sociales y naturales para estudiar la pesca artesanal con el objetivo de contribuir al diseño de áreas marinas protegidas.

Palabras clave: sistemas de información geográfica (SIG), conocimiento ecológico indígena, áreas marinas protegidas comunitarias (AMPC), Islas Salomón, Oceanía.

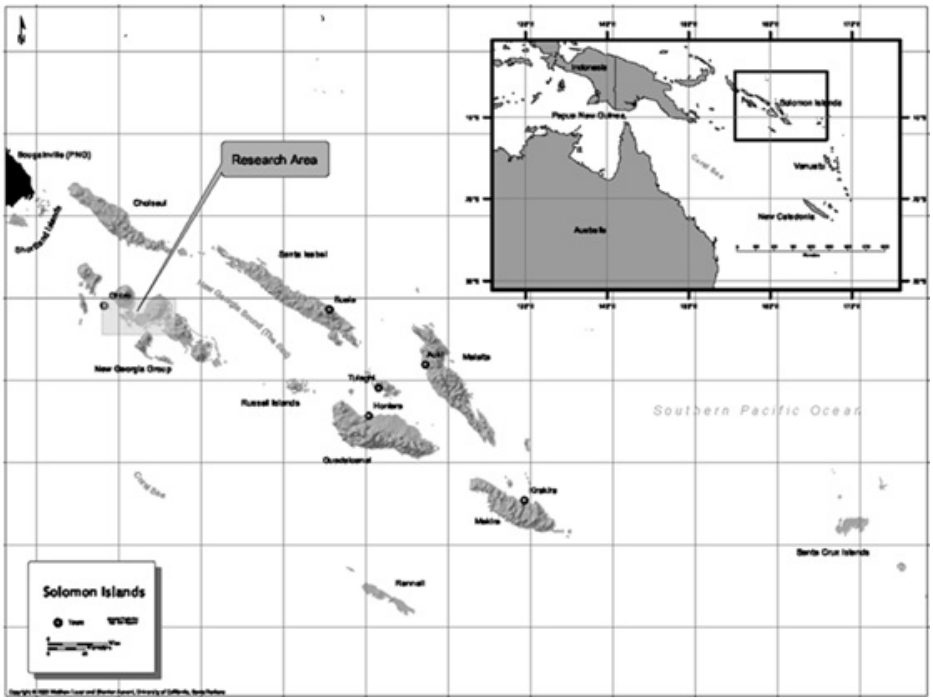
---

1 Publicado originalmente en: Shankar Aswani y Mathew Lauer , 2006, "Incorporating fishers' local knowledge and behavior Geographic Information Systems (GIS) for designing marine protected areas in Oceania", *Human Organization*, 65(1), 80-101.

Introducción

Los científicos sociales del ambiente son cada vez más conscientes de la importancia de los sistemas de información geográfica (SIG) y de las técnicas de teledetección (TD) (a menudo denominadas de forma colectiva *geomáticas*) para estudiar las distintas dimensiones espaciotemporales de las relaciones entre los seres humanos y el ambiente (Aldenderfer y Maschner, 1996; Conant, 1994; Nyerges y Green, 2000) y para emplear esos conocimientos en el diseño y la puesta en marcha de estrategias de gestión de recursos (Bowman *et al*., 2004). Los datos espacio temporales y multidimensionales de los SIG y de la teledetección pueden servir para verificar, ampliar o revelar pautas regionales o específicas de la dinámica humana, demográfica, política, económica, sociocultural y ecológica que pueden no ser evidentes para los investigadores en campo. El uso de técnicas de SIG y TD, junto con la investigación en ciencias sociales y naturales, promete profundizar nuestra comprensión de importantes cuestiones antropológicas. Algunos ejemplos son: (1) ¿cómo las pautas espaciales de la presión del pastoreo en los paisajes agropastoriles están determinadas por distintos procesos sociopolíticos y económicos? (Turner, 2003); (2) ¿cómo los cambios demográficos y de diferenciación de clases sociales pueden influir en las pautas de deforestación? (Morán *et al*., 1994; Sussman *et al*., 1994); (3) ¿cómo los distintos grupos étnicos construyen culturalmente las características espacio temporales de sus paisajes? (Jiang, 2003; Mark y Turk, 2003; Robbins, 2003); (4) ¿cómo se distribuyen espacialmente los sistemas indígenas de tenencia de la tierra y el mar en determinadas regiones y cómo cambian a lo largo del tiempo? (Mohamed y Ventura, 2000); y (5) ¿cómo el mapeo espacio temporal de los conocimientos ecológicos indígenas puede fomentar la conservación de la biodiversidad? (Rundstrom, 1995; Balram *et al*., 2004).

Figura 1. Las Islas Salomón.



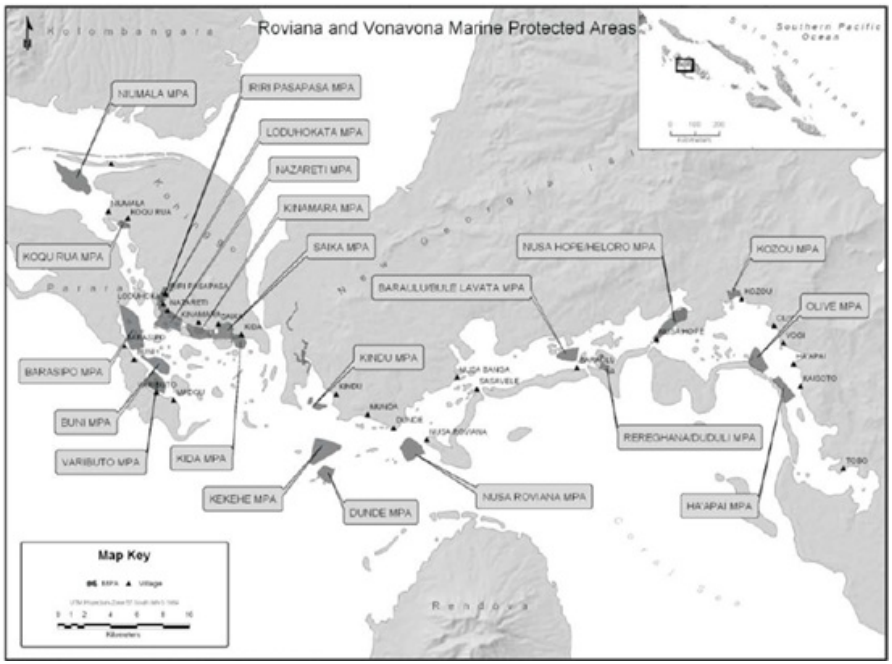
El uso de los SIG para mapear los recursos marinos con fines de gestión y conservación es un campo de interés creciente (por ejemplo, Bates y James, 2002; Mumby *et al*., 1995; Turner y Klaus, 2005; Villa *et al*., 2002), aunque rara vez se incorporan a un SIG los conocimientos ecológicos de expertos locales con fines de gestión de recursos marinos. En el contexto de la gestión de la pesca artesanal, la geomática, unida a la investigación etnográfica y de ciencias marinas, resultó útil para delimitar y catalogar los arrecifes pertenecientes a los indígenas miskitos en la costa de Nicaragua (Nietschmann, 1995), para mapear sitios de pesca en el sureste de Brasil y ayudar a los pescadores locales a utilizar este conocimiento para defender sus territorios de los arrastreros industriales (Begossi, 2001), para sistematizar los conocimientos ecológicos indígenas en datos geoespaciales con el fin de orientar la gestión de la pesca en la bahía de Bang Saphan, Tailandia (Anuchiracheeva *et al*., 2003), y para mapear los conocimientos indígenas sobre las zonas de cría, cardumen, madriguera

y captura del pez loro cototo verde en la laguna de Roviana, Islas Salomón y utilizar estos datos geoespaciales para la investigación científica y el diseño de áreas marinas protegidas (Aswani y Hamilton, 2004a).

Estos ejemplos dan fe del poder de la geomática para representar visualmente los patrones espaciotemporales de la dinámica humana y ecológica específicos de cada lugar. Además, utilizar los conocimientos y las actividades locales para construir un SIG (Balram *et al*., 2004; Stouffle *et al*., 1994) y un plan de gestión (Johannes 1998; Roberts 2000) es una estrategia rentable para obtener los datos que hacen falta y que son esenciales para seleccionar las zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, datos que de otro modo tardarían años en recopilarse. Asimismo, un SIG participativo tiene la doble ventaja de empoderar a los pueblos indígenas a la hora de cartografiar sus territorios terrestres y marinos, a la vez que les proporciona un contexto de investigación para que aporten importantes conocimientos sobre su entorno.

En este artículo, mostramos cómo puede utilizarse una base de datos de SIG para incorporar información socioespacial, como conocimientos ecológicos indígenas y datos de pesca artesanal, junto con información biofísica y de otro tipo para ayudar en el diseño de áreas marinas protegidas (APM). Se delinean las técnicas empleadas para integrar información cognitiva y conductual en un SIG mediante el uso de informantes locales. Argumentamos que convertir los conocimientos y el comportamiento socioecológico de las personas en representaciones geoespaciales permite a los investigadores: (1) conceptualizar de forma distintiva las estrategias humanas de alimentación espaciotemporalmente; (2) ilustrar cómo los mapas cognitivos humanos del paisaje marino y los organismos marinos se traducen en la clasificación, el uso y la asignación reales de recursos geográficamente (tenencia del mar); (3) reconocer los procesos ecológicos locales, incluida la estructura del hábitat (delineación del hábitat), la composición y distribución de especies y los acontecimientos biológicos espaciotemporales (agregaciones de desove) espacialmente; e (4) identificar de forma plausible los sitios que incorporan los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad, incluida la presencia de especies explotables, etapas de vida vulnerables e interconectividad entre hábitats.

Figura 2. Las lagunas de Roviana y Vonavona, Islas Salomón occidentales.



Estos conocimientos socioespaciales son importantes por dos motivos. En primer lugar, pueden ayudar a formular hipótesis sobre las respuestas humanas a la variabilidad inter e intrahábitat, junto con otros procesos ecológicos marinos; en segundo lugar, pueden ayudar a diseñar y ejecutar estrategias de gestión de recursos de forma rentable y participativa. Nos basamos en nuestra experiencia de investigación con SIG y nuestra experiencia en el establecimiento de áreas marinas protegidas en las lagunas de Roviana y Vonavona, Nueva Georgia, Islas Salomón (Figuras 1 y 2) para ofrecer un ejemplo práctico que ilustra nuestro argumento. Demostramos la importancia de combinar herramientas espaciales, el trabajo de campo antropológico y los métodos de las ciencias sociales y naturales para estudiar la pesca artesanal con el objetivo de contribuir al diseño de áreas marinas protegidas. También ilustramos un "SIG de participación pública" en el que

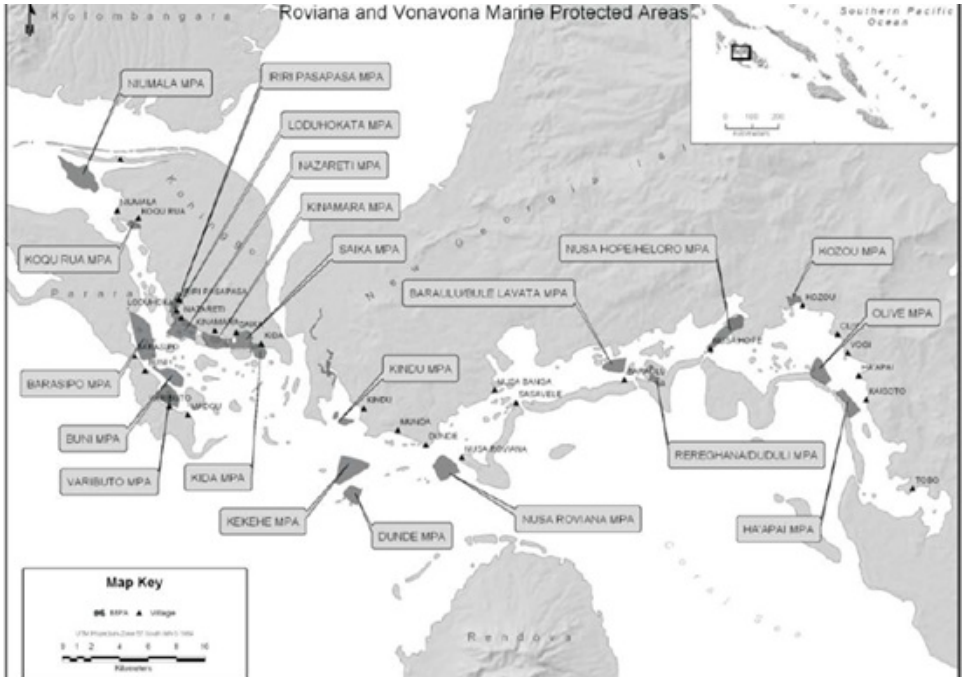
las preocupaciones, intereses y conocimientos locales se incluyen en la planificación de un SIG (Poole, 1995; cf. Rundstrom, 1995; Robbins, 2003). Por último, proponemos que la participación pública en los SIG puede ayudar a salvar la brecha entre las cogniciones indígenas y occidentales de los paisajes terrestres y marinos (Herlihy y Knapp, 2003) y mejorar la participación local en la gestión comunitaria de la pesca. Este enfoque puede aplicarse junto con otros métodos científicos marinos más convencionales para diseñar y crear áreas marinas protegidas en las islas del Pacífico.

Área de estudio

Las Lagunas de Roviana y Vonavona se encuentran en las Islas Salomón occidentales del Pacífico Sur (Figura 2); están formadas por islas de coral elevadas mar adentro, que se formaron durante el Pleistoceno debido a cambios en el nivel del mar y a la acumulación de caliza coralina, desechos orgánicos y detritos volcánicos (Stanton y Bell, 1969). La costa exterior de la laguna se compone de caliza escarpada y dentada con numerosas ensenadas, bahías, playas de arena carbonatada y fosos (Stoddart, 1969) y las lagunas interiores albergan pequeños islotes, arrecifes de coral y bajos intermareales de arrecife. Diversos hábitats marinos, como praderas marinas, manglares, pantanos de agua dulce, estuarios fluviales, canales de arena, arrecifes de coral poco profundos y descensos de arrecifes externos salpican las lagunas. Las lagunas de Roviana y Vonavona se encuentran en la ecorregión de los mares de Bismarck y Salomón, un gran ecosistema marino que se extiende por las Islas Salomón, la costa norte de Papúa Nueva Guinea y la región septentrional de Papúa Occidental. Los biotopos marinos regionales son muy diversos, productivos y están moderadamente poco dañados por las actividades humanas, lo que convierte a esta zona en uno de los puntos calientes de biodiversidad marina del mundo (WWF South Pacific Program, 2003). Más de doce mil personas viven en la zona de Roviana y Vonavona, y la tasa de crecimiento demográfico de la región es alta (Censo Nacional, 1999). Los líderes de las comunidades locales ejercen la gobernanza y la gestión del uso y acceso a los recursos naturales dentro de sus respectivas tierras y mares consuetudinarios. Sin embargo, la gestión comunitaria no ha garantizado el uso sostenible de los recursos naturales, ya

que una explosión demográfica y las presiones desenfrenadas del desarrollo (tala de árboles y pesca industrial) amenazan cada vez más la ecología y la estabilidad social de esta región.

Figura 3. Red del Área Marina Protegida (AMP) de Roviana y Vonavona.



En respuesta a estas amenazas, en 1999 creamos un proyecto de conservación marina (Aswani *et al*., 2004). Nuestro objetivo era crear una red de AMP y poner en marcha proyectos de desarrollo de infraestructuras para ayudar a las comunidades rurales. Los objetivos biológicos de la actual red de AMP son proteger las especies y hábitats vulnerables (es decir, la biodiversidad y la función de los ecosistemas), proteger las fases susceptibles del ciclo vital (es decir, las zonas de desove y cría) y aumentar la productividad pesquera de la región. Los objetivos sociales consisten en darle continuidad a prácticas con las que los miembros de la comunidad ya están familiarizados (por ejemplo,

la tenencia consuetudinaria del mar y los conocimientos ecológicos indígenas) y mejorar el bienestar de la comunidad en toda la región. La población local es más capaz de aprehender el valor social y biológico de la red de AMP y entender las restricciones de uso que requiere (Aswani y Hamilton, 2004b) cuando se hace explícita la interdependencia de la conservación y la salud y el bienestar de las comunidades locales. En la actualidad, se han establecido 21 AMP, la mayoría de ellas como zonas permanentes de "no captura" (Figura 3). Además, se han puesto en marcha una serie de pequeñas mejoras de infraestructuras (por ejemplo, clínicas, escuelas y salones comunitarios) en toda la región (Aswani y Weiant, 2004).[2]

Se eligieron varias zonas para el desarrollo de las AMP por su importancia ecológica y social mediante una combinación de evaluaciones locales (por ejemplo, la proximidad a la aldea para la vigilancia y el cumplimiento) y la información obtenida de nuestra investigación. Cabe destacar que las AMP eran la mejor receta de gestión teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de la región. La vigilancia de las restricciones de capturas y tallas es difícil dada la extensión de la laguna, pero no lo es tanto detectar a los cazadores furtivos que entran y salen de las zonas vedadas. Combinamos los conocimientos ecológicos indígenas (mapeo con el SIG de hábitats y acontecimientos biológicos identificados en la localidad) con la ciencia marina (censos visuales submarinos [UVC]) para estudiar aspectos de las características del ciclo vital de las especies objetivo) para identificar hábitats vulnerables y etapas vitales críticas de especies susceptibles en diversas zonas de la laguna (Aswani y Hamilton, 2004a). También incorporamos datos longitudinales (1994-2004) sobre actividades pesqueras humanas (Aswani, 1998a) al SIG para examinar patrones espaciales y temporales del esfuerzo pesquero humano y los rendimientos. Por último, estudiamos de forma sistemática la tenencia consuetudinaria del mar (TCM) en toda la región con el fin de seleccionar los lugares en los que había una mínima disputa pública sobre los recursos naturales y los límites del mar (véase Aswani, 1999; 2002; 2005).

2 Las iniciativas de conservación, desarrollo y educación se ofrecieron a los residentes locales como componentes integrales de un enfoque de tres vertientes para el desarrollo rural y no como contrapartidas para sus AMP.

Métodos

El conocimiento de los pescadores y el SIG

Los datos sobre los conocimientos ecológicos indígenas se documentaron mediante la participación directa en salidas de pesca y entrevistas con pescadores. Se realizaron entrevistas abiertas y estructuradas durante un periodo de doce años (1992-2004) a más de trescientos hombres y mujeres jóvenes (18-39), de mediana edad (40-59) y mayores (60>) de los pueblos de las lagunas. Aunque se buscó entrevistarse con pescadores activos y experimentados mediante un muestreo de bola de nieve, también se interrogó a la población general por una muestra aleatoria estratificada. Para conceptualizar mejor el paisaje marino, se plantearon a los informantes una serie de preguntas relativas a las características espacio temporales de sus caladeros y los hábitats bentónicos existentes, entre otros procesos biológicos asociados. Los pescadores identificaron unos catorce tipos de hábitats principales y seis secundarios, así como 615 zonas delimitadas localmente en toda la región. Estos últimos se cartografiaron de forma manual sobre fotografías aéreas de las lagunas de Roviana y Vonavona (Aswani, 1997), y así se estableció la base espacial para la posterior representación visual del SIG.

A continuación, incorporamos los conocimientos ecológicos marinos indígenas a una base de datos del SIG delineando los límites de zonas biofísicas identificadas localmente con instrumentos del sistema de posicionamiento geográfico (GPS) y registramos los hábitats y organismos biológicos asociados. Para facilitar la recopilación de los conocimientos aeroespaciales indígenas, primero elaboramos un mapa base con fotografías aéreas. Para ello, en primer lugar, se digitalizó un conjunto de fotografías aéreas en blanco y negro de 9x9 pulgadas (91 fotografías) de las lagunas de Roviana y Vonavona (tomadas en 1984 por el Gobierno de las Islas Salomón en una escala de 1:24,000) y, en segundo lugar, se recogieron puntos de control terrestre para poder georrectificar las imágenes y situarlas con precisión en coordenadas espaciales.[3] El mapa

3 Nótese que tuvimos en cuenta la antigüedad de estas fotografías y fuimos cuidadosos a la hora de identificar rasgos culturales y geofísicos que pudieran haber cambiado desde 1984.

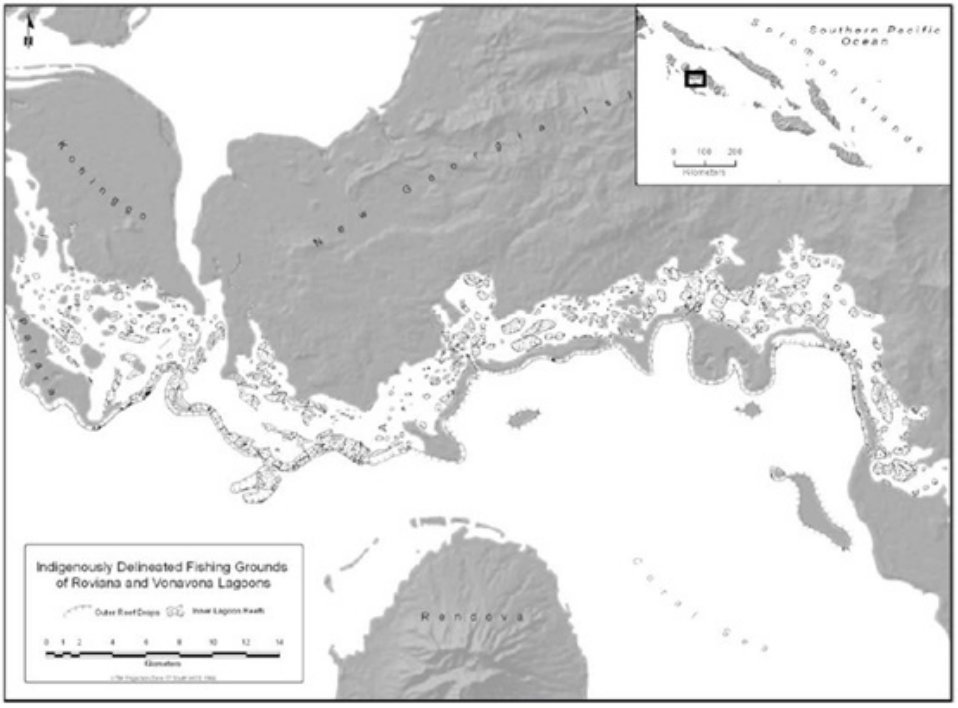
base digitalizado de fotografías aéreas se cargó en una computadora portátil y sirvió como importante herramienta cartográfica para los investigadores y los informantes locales a la hora de recopilar datos espaciales en la región.

Una vez completado el mapa base de fotos aéreas digitalizadas, trabajamos con pescadores locales para mapear el paisaje marino con receptores GPS —un aspecto participativo de nuestro trabajo por medio del cual la población local interactuó con el SIG y generó datos para él—. Nos centramos en zonas biofísicas definidas por la población indígena, los caladeros y los hábitats marinos asociados, incluidos, entre otros, los arrecifes de la laguna interior (*sagauru masa*) y los descensos de arrecifes externos (*teqoteqo pa vuragare*) (Figura 4). Además, registramos las ubicaciones de los lugares de desove, cría, madriguera y agregación de especies concretas dentro de cada área reconocida. Los pescadores locales de cada comunidad guiaron a un investigador en una pequeña embarcación por el perímetro de cada área nombrada, que podía o no corresponderse con los límites de biotopos marinos concreto (por ejemplo, praderas marinas). Se ubicaron características biológicas singulares (por ejemplo, lugares de agregación) si se encontraban dentro del lugar, y se señalaban las coordenadas con el GPS. Se seleccionó a informantes con conocimientos que ayudaran a cartografiar estas características del paisaje marino mediante un muestreo de bola de nieve y por medio de reuniones con los ancianos de la localidad. Además, como se detalla en Aswani y Lauer (s.f.), los informantes demarcaron los límites de los sustratos bióticos y abióticos subyacentes utilizando un rotulador directamente sobre impresiones de fotografías aéreas de gran formato. Los mapas de papel resultantes, con los respectivos tipos bentónicos dibujados en ellos, se escanearon, y los archivos de imagen se cargaron en el SIG para su georrectificación. Para comprobar la precisión de la identificación de hábitats locales utilizamos cuadrantes convencionales de buceo.

A lo largo de cuatro temporadas de campo (en total, más de siete meses), cartografiamos 491 lugares de Roviana y Vonavona definidos y nombrados por la población indígena, así como sus principales características biológicas, que incluían los tipos de hábitat de laguna objetos de conservación. La extensión espacial de la zona (representada como líneas o polígonos) y la ubicación de características biológicas concretas (representadas usualmente como puntos) recogidas con los receptores GPS se consolidaron en un gran archivo y se

importaron a nuestra base de datos del SIG como una capa (a veces denominada tema o cobertura). En la Figura 4, este conjunto de datos se muestra superpuesto a un mapa topográfico para ilustrar el sistema de arrecifes de la laguna tal como lo definen los habitantes locales. Visualizar el mosaico de lugares definidos localmente y sus hábitats asociados (Franklin *et al*., 2002) nos permitió elegir lugares para posibles muestreos al realizar estudios ecológicos marinos convencionales (por ejemplo, Aswani *et al*., 2004). También nos proporcionó pistas sobre la conceptualización del paisaje marino por parte de los habitantes de Roviana y la interconectividad de los distintos hábitats utilizados por los humanos. Para precisar nuestro enfoque, ofrecemos ejemplos de este trabajo para las AMP de Baraulu y Nusa Hope.

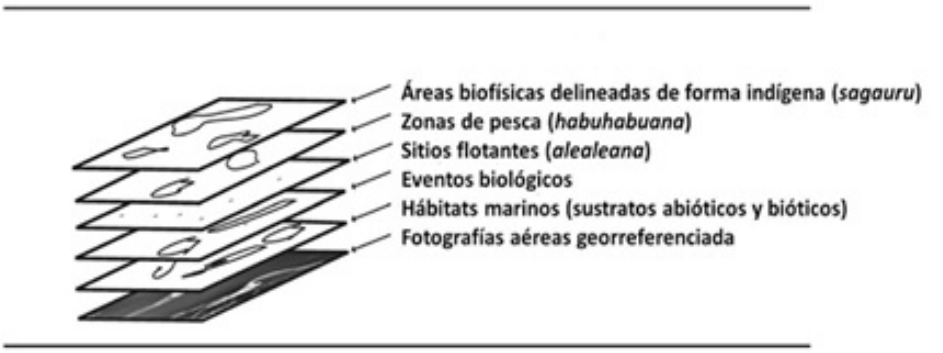
Figura 4. Áreas biofísicas de las lagunas de Roviana y Vonavona delimitadas por la población indígena, en particular las asociadas a los arrecifes de la laguna interior y los descensos de arrecifes externos.



El comportamiento de los pescadores y el SIG

Se mostraron las características espaciales y temporales del comportamiento pesquero de los pueblos de Baraulu y Nusa Hope consultando nuestra base de datos del SIG y mostrando después los datos derivados de las consultas. Para ello, vinculamos los datos de búsqueda de alimento que habíamos recopilado durante los últimos doce años con nuestro conjunto de datos de GPS de zonas definidas por la población indígena. El subconjunto de datos de forrajeo se empleó antes para probar varias hipótesis de la teoría de forrajeo óptimo (Aswani, 1998a). Los ecólogos humanos han empleado de forma habitual modelos de forrajeo para predecir diversos aspectos del comportamiento de forrajeo humano (Bird y Bird, 1997; Smith, 1991) pero rara vez han unido la potencia de los SIG a sus análisis (pero véase Schweik, 2000). Para este estudio, probamos una hipótesis extraída del modelo de selección de parche (MacArthur y Pianka, 1966) para comprender las elecciones de parche de los pescadores mediante la variación espaciotemporal y, lo que es más importante, para mostrar visualmente los patrones de forrajeo a través de diversos hábitats marinos y durante las diferentes estaciones del año. El modelo de selección de parche predice que los pescadores seleccionarán zonas (por ejemplo, hábitats o caladeros) en función de la tasa promedio de rendimiento de cada parche. Los parches de recursos se clasifican de mayor a menor rendimiento y se añaden al área de alimentación hasta que el ahorro en tiempo de desplazamiento se ve compensado por una reducción en la tasa promedio de rendimiento para el conjunto de parches utilizados (Winterhalder, 1981). Utilizando este modelo, comprobamos la hipótesis de que la asignación total de tiempo a un tipo de hábitat (conjunto de parches) aumenta cuando el rendimiento estacional de ese hábitat aumenta y es superior al de otros hábitats. Por el contrario, la asignación global de tiempo a un tipo de hábitat disminuye cuando el rendimiento estacional de ese conjunto de parches disminuye y cuando es inferior al de otros hábitats.

Figura 5. Cognición indígena del paisaje marino representada por capas (o temas) con SIG (sistema de información geográfica).



No discutimos toda una serie de cuestiones teóricas y metodológicas relativas a la aplicación de modelos de forrajeo en contextos marinos y reconocemos que nuestra aplicación es rudimentaria dados los avances actuales en la ecología humana del comportamiento (Winterhalder y Smith, 2000). Nuestro objetivo, sin embargo, no es poner a prueba los modelos de forrajeo *per se*, sino mostrar cómo las características espaciotemporales de los patrones de forrajeo específicos de un lugar pueden revelarse mediante la consulta y visualización de la información con SIG. Pusimos a prueba la hipótesis de la búsqueda de alimento analizando 1 946 horas de datos de pesca para Baraulu y 526 horas para Nusa Hope. Obsérvese que los conjuntos de datos originales de Baraulu y Nusa Hope abarcaban 2 893 y 755 horas de datos de forrajeo, respectivamente. El subconjunto de datos analizado es más reducido porque sólo pudieron analizarse los nombres de los parches que aparecían tanto en los subconjuntos originales de forrajeo (1994-1995) como en la base de datos GPS de zonas cartografiadas y nombradas más recientemente (2001-2004). Además, solo se incluyeron los eventos de pesca con líneas de mano (curricán, línea de fondo, caña, etc.). Para utilizar las mediciones de abundancia relativa para determinar los rendimientos locales, clasificamos los datos según el tipo de aparejo de pesca empleado. Ciertos aparejos, como las redes de pesca, permiten tasas

de rendimiento mucho más elevadas y no son comparables a los aparejos estándar de anzuelo y sedal (Appeldoorn, 1996).[4] Por último, seleccionamos zonas biofísicas de los tipos de hábitat de *arrecife de la laguna interior*, *entrada de la laguna* y *descensos de arrecifes externos* para ilustrar cómo se desplazan los pescadores entre los distintos lugares. Estos tipos de hábitat son los más importantes y los más explotados en la zona de la laguna, y la mayor parte de nuestros datos de búsqueda de alimento se recogieron en terrenos con estas características.

Los datos sobre pesca artesanal para este análisis se recopilaron mediante una encuesta regional de captura. En cada salida de pesca se registraron, entre otras variables, los tiempos de remo hasta los caladeros, el tipo de hábitat de cada lugar, el tiempo de permanencia en cada sitio, el peso total de pescado recogido y los nombres y cantidades de los organismos capturados. Se emplearon dos métodos de investigación: seguimientos focales y diarios de autoinforme. El análisis de seguimiento focal implicó llevar registros de tiempo de desplazamiento de los pescadores y medir sus capturas en cada parche visitado. El método del diario consistió en reclutar a sujetos seleccionados al azar para que llevaran diarios de sus actividades pesqueras. Estos datos se utilizaron para explorar los efectos de la aldea y el tipo de hábitat en las tasas promedio de rendimiento neto[5]

4 Los episodios de pesca en red y en masa son métodos muy importantes a la hora de analizar los patrones locales de uso de los recursos, y hemos cartografiado de forma independiente su ocurrencia en toda la laguna para fundamentar nuestras decisiones de gestión. Sin embargo, estos eventos de pesca no fueron apropiados para nuestro análisis de forrajeo óptimo, ya que sesgaron en gran medida los resultados al difuminar los patrones locales más comunes de utilización de los recursos (es decir, la pesca con línea de mano).

5 La medida de *tasa promedio de rendimiento neto* (Smith, 1991), que se utilizó para estimar la abundancia relativa, es similar al concepto de captura-por-unidad-de-esfuerzo (CPUE). Esta medida es equivalente a la energía obtenida durante la pesca (el valor en kcal de la captura comestible) menos la inversión en mano de obra (los costos laborales incurridos durante el forrajeo, incluidos los tiempos de desplazamiento, búsqueda, y manipulación) dividido por el tiempo global de permanencia en un caladero. El costo de la mano de obra se calcula multiplicando los minutos dedicados a una determinada actividad (por ejemplo, remar en una canoa o forrar a mano) por medidas estandarizadas procedentes de fuentes publicadas (medida de calorimetría indirecta para diversas actividades ajustadas a la edad, el peso y el sexo [es decir, tasa metabólica basal o TMB]).

y la duración de los eventos de pesca (para más detalles, véase Aswani, 1998a; 1998b).[6]

El siguiente paso consistió en utilizar el SIG para vincular nuestro conjunto de datos cartográficos espaciales de los parches de recursos definidos por la población indígena (recogidos con receptores GPS) con nuestros datos de atributos no espaciales (conjunto de datos de forrajeo). Para vincular los conjuntos de datos en el SIG, al menos un campo (columna) de la tabla de datos espacialmente no explícitos debe coincidir con un campo en la tabla de datos espacialmente explícitos. En este caso, el nombre indígena del caladero era el atributo común de nuestros conjuntos de datos de forrajeo y cartográficos (GPS). Esto nos permitió analizar las relaciones espaciotemporales entre determinados hábitats marinos y los parches que los componen, por un lado, y los cambios en su productividad relativa y los aumentos o disminuciones temporales asociados en el esfuerzo de forrajeo por parte de los miembros de varios pueblos regionales para explotar estos recursos, por otro.

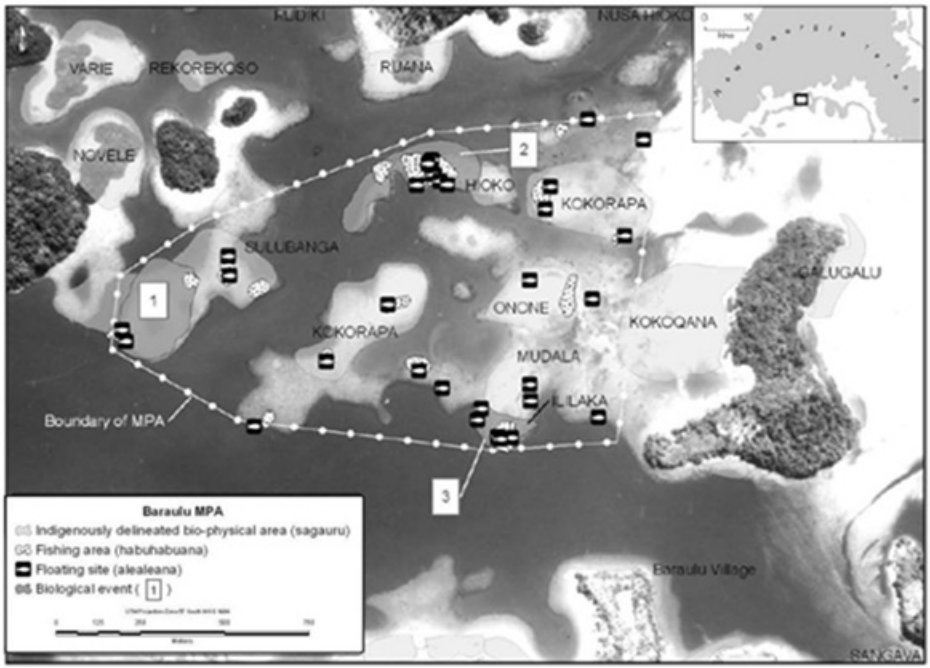
Por último, para visualizar las características espaciotemporales del esfuerzo pesquero utilizamos las capacidades de consulta y visualización del SIG. Realizamos una consulta con el SIG que extrajo los eventos de pesca asociados a cada una de las tres estaciones de marea reconocidas localmente en la laguna de Roviana: (1) *masa rane-odu bongi*, o estación de marea baja diurna/alta nocturna (de mayo a septiembre); (2) *odu rane-masa bongi*, o temporada de marea alta diurna/baja nocturna (de finales de septiembre a finales de enero), y (3) *vekoa kolo*, que es una estación de marea intermedia (de febrero a abril).[7] Utilizamos el SIG para agregar las mediciones de la tasa promedio de rendimiento y calculamos la asignación proporcional de tiempo para cada caladero de cada

6 En total, se recopiló un conjunto de datos que abarca más de 10 000 eventos de pesca y se extiende por más de 15 000 horas de tiempo de pesca para la totalidad de las lagunas de Roviana y Vonavona durante un periodo de diez años (1994-2004). En la actualidad estamos importando todos estos datos al SIG para realizar un análisis espacio temporal regional de los patrones de pesca.

7 Nótese que no todos los informantes reconocen esta época como una estación específica de las mareas y siguen refiriéndose a este periodo como *odu rane.* El término *vekoa kolo* ('agua que permanece') se refiere a pequeñas fluctuaciones en los niveles de las mareas con una persistencia de veinticuatro horas de mareas medias y altas (o mareas muertas). No obstante, el término *vekoa kolo* se utiliza aquí para referirse a un periodo en el que se produce un claro cambio en los patrones de las mareas y las actividades pesqueras asociadas (al menos durante 1994-1995).

tipo de hábitat en cada temporada. A continuación, mostramos e imprimimos estos seis mapas en yuxtaposición para mejorar la interpretación visual y la descripción de patrones. Para interpretar mejor los datos, presentamos los resultados de las aldeas de Baraulu y Nusa Hope, en Rovania Oriental, en lugar de los de toda la región.

Figura 6. Mapa indígena de la AMP de Baraulu.



Las áreas enumeradas son acontecimientos/características de importancia ecológica.

Áreas 1 y 2: zona de cría/madriguera del *topa* (pez loro cototo verde, *Bolbometopon muricatum)*. Aquí hay grandes formaciones de coral *huquru* (*Porites cylindrica);*

Área 3: zona de agregación del *heheoku* (pargo jorobado, *Lutjanus gibbus)*. También aquí hay grandes formaciones de coral *patu pede (Acropora* spp.) Todas las zonas se cartografiaron con receptores GPS. La capa *sagauru* se colocó debajo de las capas *alealeana* y *habuhabuana* para facilitar su visualización.

(En cuadrado)

AMP de Baraulu

Zona biofísica delimitada por la población indígena (sagauru)

Zona de pesca (habuhabuana)

Lugar de flotación (alealeana)

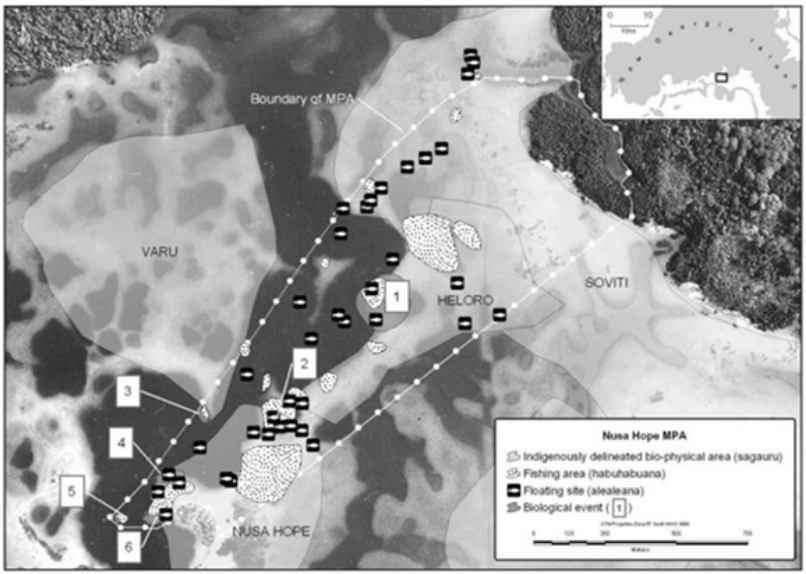
Acontecimiento biológico

Resultados

Visualización espacial de los conocimientos ecológicos indígenas

Los pueblos de Roviana dividen el océano en lugares con nombres que representan zonas de extracción de recursos biofísicos que permiten o que impiden la navegación, y marcadores culturales e históricos que definen los paisajes marinos (*sagauru*, se utiliza como genérico de 'arrecife'). A continuación, los pescadores identificaron una serie de caladeros (*habuhabuana*) anidados o limítrofes con los caladeros más grandes y delimitados con nombres indígenas. Los caladeros, a su vez, se componen de una o varias zonas o sitios de flotación (*alealeana*) en los que se pesca realmente (por ejemplo, un afloramiento de arrecife). Por último, subyacen a estas zonas uno o varios de los hábitats bentónicos reconocidos en la localidad (y los fenómenos biológicos asociados) que existen en las lagunas. La visualización de las zonas delimitadas por la población indígena y los hábitats asociados (ilustrados como capas en el SIG) (Figura 5) permitió comprender mejor el conocimiento espacial del mar por parte de la población roviana. Antes de la designación de la AMP, la población local había dividido y, con nuestra ayuda, georreferenciado en el espacio las zonas designadas en siete áreas biofísicas principales: Sulubanga, Kokorapa 1 y 2, Hioko, Onone, Mudala, Ililaka y Kokoqana, para Baraulu (Figura 6), y Sagauru Nusa Hope, Heloro, Varu, y Soviti, para Nusa Hope (Figura 7).

Figura 7. Mapa indígena del AMP de Nusa Hope.



Las zonas numeradas son acontecimientos/características de importancia ecológica.

Área 1: zona de agregación de desove del *heheoku* (pargo jorobado, *Lujtanus gibbus)* y zona de agregación del *pehu* (bakoko gigante negro, *Plectorhinchus gibbosus/obscurum*)
Área 2: zona de cría del *makoto lio* (pez ballesta de bordes amarillos, *Pseudobalistes flavimarginatus)* y del *makoto noa* (pez ballesta titán, *Balistoides viridiscens*).
Área 3: zona de agregación de reproducción del *pazara aquma* (mero de coral de cola cuadrada, *Plectropomus areolatus)*
Área 4: zona de cría del *makoto lio* y *makoto noa*
Área 5: zona de cría/madriguera del *topa* (pez loro cototo verde, *Bolbometopon muricatum).*
Área 6: zona de cría/madriguera del *topa* y zona de agregación del *mihu* (emperador de cara larga, *Lethrinus olivaceous*), *kakaha* (pargo rabo amarillo, *Lutjanus argentimaculatus*) y *ramus* (emperador de rayas naranjas, *Lethrinus obsoletus*). Todas las zonas se cartografiaron con receptores GPS. La capa *sagauru* se colocó debajo de las capas *alealeana* y *habuhabuana* para facilitar su visualización.

(En cuadrado)

AMP de Nusa Hope

Zona biofísica delimitada por la población indígena (sagauru)

Zona de pesca (habuhabuana)

Sitio de flotación (alealeana)

Acontecimiento biológico

Dentro de ellas, los pescadores de Baraulu dividieron el área de la AMP en 17 caladeros (*habuhabuana)* y 31 sitios de flotación (*alealeana*), y los pescadores de Nusa Hope identificaron 18 y 37, respectivamente, situadas en diferentes zonas geomorfológicas (descensos de arrecife, planicies de arrecife, etc.). A continuación, los informantes locales identificaron los siguientes tipos de hábitats subyacentes a estos lugares construidos culturalmente: canales de arrecife (*karovoana*), pozas de arrecife (*kopi*), bancos de arena (*bolebole*), arrecifes poco profundos (*sagauru masa*), arrecifes de profundidad media (*sagauru lamana*), praderas marinas (*kulikuliana*) y manglares (*petupetuana*). En la Tabla 1 se resume cómo los informantes distinguieron los sustratos bentónicos compuestos de cada hábitat (que se encuentran en las zonas designadas como AMP), que se asemejan mucho a los códigos de grupos abióticos y bióticos detallados en el *Reef check survey manual* (Hodgson *et al*., 2003) y el *AIMS manual for underwater research* (English *et al*., 1997).

Tabla 1 - Clasificación indígena de los hábitats y sustratos bentónicos asociados encontrados en las AMP [abreviada] (homólogos binomiales hispanos y/o latinos entre paréntesis) que se corresponden con los códigos de grupos abióticos y bióticos detallados en el Reef Check Survey Manual (Hodgson et al. 20003) y el AIMS Manual for Underwater Research (English et al. 1997).

Hábitat indígena	/ Sustratos abióticos dominantes	Cobertura biótica dominante
Cobertura biótica dominante (manglares [zona acuática])	*Kosiri (sieno/barro)* *Nelaka (sieno/arena)* *Patu horahoraka (coral muerto/piedras)*	*Kuli (Enhalus acoroides pasto marino)* *Patu voa (Porites o corales masivos)*

Kulikuliana **(praderas marinas)**	*Onone (arena)* *Nelaka (silt/sand)* *Patu horahoraka (coral muerto/piedras)*	*Kuli (Enhalus acoroides pasto marino)* *Kuli ngongoto (pastos marinos* *Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae diversos)* *Tatalo, Kakoto, Omomo, y Garagara Tatalo, Kakoto, Omomo, y Garagara* *(Halimeda spp. y macroalgas diversas)*
Sagauru Masa **(arrecife poco profundo de la laguna interior)**	*Onone (arena)* *Zalekoro (escombros)* *Patu horahoraka (coral muerto/piedras)*	*Patu voa (Porites o corales masivos),* *Patu pede (Acropora spp. o corales sub masivos y joroba)* *Huquru (Porites cylindrica o corales joroba)* *Nene siki (corales Acropora y otros corales joroba Seriatopora)* *Binu (corales duros diversos)* *Toropae kiso (Fungia spp. o corales hongo)* *Ime (Caulerpa spp. o macroalgas) Tatalo, Kakoto, Omomo, y Garagara* *(Halimeda spp. y macroalgas diversas)* *Laza keana (algas coralinas diversas)* *Lumulumutu (algas de tierra diversas)* *Puha (genérico de esponjas)*

Sagauru Lamana **(arrecife de mediana profundidad al interior de la laguna)**	*Onone (arena)* *Zalekoro (escombro)* *Toropae kiso (Fungia spp. o corales hongo)*	*Huquru (Porites cylindrica o coral joroba)* *Patu voa (Porites o corales masivos)* *Binu (corales duros diversos)* *Patu horahoraka (coral muerto/piedras) /Toropae kiso (Fungia spp. o corales hongo)* *Laza keana (algas coralinas diversas)* *Puha (genérico de esponjas)*
Bolebole **(banco de arena)**	*Onone (arena)* *Zalekoro (escombros)*	*Kuli ngongoto [cobertura escasa] (pastos marinos Cymodoceaceae e Hydrocharitaceae)* *Tatalo, Kakoto, Omomo, y Garagara (Halimeda spp. y macroalgas diversas)* *Ime (Caulerpa spp. o macroalgas)*
Kopi **(pozas de laguna)**	*Nelaka* (sieno/arena) *Onone* (arena) *Zalekoro* (escombros)	Los corales pueden aparecer en las paredes de la poza, pero estas suelen estar compuestas de sustratos abióticos.
Karovoana **(canal de arrecife)**	*Zalekoro* (escombros) *Onone* (arena) *Nelaka* (sieno/arena)	Los corales pueden aparecer en los muros del canal, pero suelen estar compuestas de sustratos abióticos.

En la actualidad, estamos llevando a cabo un estudio intensivo con informantes locales para delimitar en el espacio la ubicación y el porcentaje de los diferentes sustratos abióticos y bióticos dentro de AMP no estudiadas (es decir, reservas establecidas por los pueblos) y sitios potenciales para AMP (Aswani y Lauer, s.f.). En este trabajo, sin embargo, al carecer de datos completos sobre porcentajes de tipos de sustrato, nos limitamos en el análisis a los datos que hemos recopilado sobre eventos y características biológicas de importancia ecológica, que los informantes locales ayudaron a localizar e identificar (las posiciones exactas se registraron con receptores GPS). Entre ellos se incluyen presuntas zonas de agregación y desove del pargo jorobado (*Lutjanus gibbus [heheoku])* y zonas de madriguera/cría del pez loro cototo verde (*Bolbometopon muricatum* [*topa*]) en la zona Baraulu (Figura 6.), y zonas de agregación y desove de varias especies de serránidos (e.g., *Plectropomus areolatus*), zonas de madriguera de peces loro cototo verde y zonas de nidificación de dos especies de peces ballesta (*Pseudobalistes flavimarginatus* y *Balistoides viridescens*) entre otros en la zona de Nusa Hope (Figura 7). Además, recopilamos extensos inventarios de todos los organismos en cada ubicación georreferenciada, incluidos los peces comunes avistados o capturados en la zona, y datos sobre otros organismos bentónicos (Tablas 2 y 3). Mediante el SIG, vinculamos estas tablas a los datos georreferenciados de los caladeros.

Visualización espacial del esfuerzo pesquero

Para analizar y visualizar las características espaciales de la pesca artesanal, examinamos las relaciones espacio temporales entre (1) determinados hábitats marinos y los cambios en su productividad relativa (por ejemplo, acontecimientos biológicos/ambientales temporales que supuestamente aumentan el rendimiento pesquero) y (2) los aumentos temporales asociados en el esfuerzo de forrajeo de los miembros de diversas aldeas regionales para explotar estos recursos. Se esperaba que los pescadores dedicaran más tiempo estacional (horas totales de pesca) al tipo de hábitat de mayor rendimiento (es decir, al conjunto de caladeros dentro de ese tipo de hábitat) y menos tiempo al hábitat o conjunto de caladeros de menor rendimiento.

En dos de tres de las estaciones de marea se dirigió un mayor esfuerzo general a los hábitats con los rendimientos más altos, mientras que los hábitats con rendimientos más bajos no se visitaron con tanta frecuencia. Sin embargo, estos patrones variaron entre los dos pueblos. En Baraulu, la asignación global de tiempo aumentó cuando el rendimiento estacional del hábitat aumentó y fue superior a la de otros hábitats durante las estaciones de marea alta diurna (*odu rane*) e intermedia *(vekoa kolo*) (obsérvese los parches en escala de grises más oscuros en las dos imágenes inferiores de las columnas izquierda y derecha de la Figura 8). En Nusa Hope, por el contrario, este patrón era aparente durante las estaciones de marea baja diurna (*masa rane*) y alta nocturna (*odu rane*) (obsérvese los parches en escala de grises más oscuros en los dos mapas superiores de las columnas izquierda y derecha de la Figura 9).

A pesar de las divergencias en la asignación global de tiempo a los hábitats productivos por estación, se observaron paralelismos periódicos en los patrones de visitas a los distintos lugares (y una asignación concomitante del tiempo dentro del parche) entre los pueblos. Por ejemplo, el número de lugares visitados en la laguna interior cambió de forma significativa a lo largo de las estaciones (chi2 [df = 2, N = 89] = 8.2, $p < 0.02$). Tanto Baraulu (prueba de signos, $p < 0.02$) como Nusa Hope (prueba de signos, $p < 0.00001$) visitaron más arrecifes de la laguna interior que de la exterior. Los pueblos fueron similares (chi2 [df = 2, N = 89] = 0.04, p = 0.84, n.s.) en sus patrones estacionales, con más arrecifes poco profundos en la laguna interior (sección superior de las Figuras 8 y 9) visitados durante la estación de marea baja diurna, menos durante la estación de marea alta diurna y la menor cantidad durante la temporada de marea intermedia. Por el contrario, el número de arrecifes de la laguna exterior visitados permaneció constante a lo largo de las tres estaciones de marea para ambos pueblos (chi2 [df =2, N = 33] = 0.06, p = 0.81, n.s.).

En el caso de los arrecifes de la laguna interior, es concebible que, durante la estación de marea baja diurna, una estrategia cambiante permitiera a los pescadores evitar una caída drástica de su consumo energético medio durante la pesca. Es decir, aumentó el número de parches (y el "tiempo por periodo" disminuyó) porque los pescadores podrían encontrar numerosos

parches productivos alternativos a poca distancia. Con un cambio en las estaciones y en las tasas promedio de rendimiento, los pescadores empezaron a prestar más atención a otros hábitats y a visitar menos arrecifes del interior de la laguna (o a pasar más tiempo en menos parches en el caso de Nusa Hope). En cambio, es posible que en el caso de los descensos de arrecifes externos se visitaran menos parches porque los tiempos de desplazamiento a estos caladeros eran mayor que a otros hábitats. Una vez que los pescadores llegaban a estas zonas (es decir, después de haber pagado los costos de traslado para el remado) les resultaba más rentable permanecer en el parche (aumentando así el "tiempo por periodo") incluso en condiciones de rendimientos decrecientes. Los modelos de asignación del tiempo, como el teorema del valor marginal (TVM), han predicho un cambio de comportamiento como en estos casos.

La representación visual de la Tabla 4 en las Figuras 8 y 9 (como datos desagregados) ilustra temas importantes en el patrón espacial. En general, hubo claras diferencias en el porcentaje de tiempo asignado a los diferentes hábitats entre Baraulu y Nusa Hope a lo largo de las estaciones. A lo largo del año, el hábitat de la entrada de la laguna se explotó con mayor intensidad en Baraulu, mientras que los arrecifes del interior de la laguna se visitaron más a menudo en Nusa Hope. Durante la estación de marea baja diurna, los pescadores en Baraulu frecuentaron más la entrada y dedicaron la misma proporción global de tiempo a los arrecifes de la laguna interior y exterior (sección superior de la Figura 8). Los pescadores de Nusa Hope frecuentaron los arrecifes de la laguna interior y las entradas (sección superior de la Figura 9). Sin embargo, con la llegada de la estación de marea alta diurna (*odu rane*) (sección central de las Figuras 8 y 9), los pescadores de Baraulu intensificaron sus actividades en los hábitats de la entrada y de los descensos de arrecifes externos, mientras que los pescadores de Nusa Hope siguieron centrando su esfuerzo en los arrecifes de la laguna interior y la entrada. Por último, durante la estación de marea intermedia (*vekoa kolo*), los pescadores de Baraulu se centraron casi por completo en la entrada, mientras que los de Nusa Hope siguieron explotando los arrecifes de la laguna interior y desplazaron parte de su atención de la entrada a los descensos de arrecife externos (sección inferior de las

Figuras 8 y 9). En general, los habitantes de Nusa Hope no explotaron la entrada a la laguna y los arrecifes externos de manera tan intensa como los pescadores de Baraulu. No lo necesitaban, ya que sus arrecifes limítrofes poco profundos se encuentran entre los más ricos de la laguna de Roviana y el rendimiento es alto durante todo el año en estos caladeros.

Tabla 2 - Características generales de las zonas biofísicas delimitadas dentro del Área Marina Protegida del pueblo de Baraulu (basadas en el conocimiento local)

Nombre del caladero	*Características Generales*	*Especies de presa comunes (peces)/*	*Especies de presa comunes (otras)*	*Acontecimientos biológicos significativos*
Sulubanga	Arrecife poco profundo y de profundidad media con algunas cabezas de coral *Porites,* colonias extensas de *Porites cylindrica,* algunos escombros de coral, y sieno mezclado con pastos marinos Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae diversos	*Bolbometopon muricatum, Lethrinus elongatus, Lutjanus gibbus/L. adeti, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Siganus* spp., serránidos diversos, carángidos diversos	*Anadara antiquata, Gafrarium tumidum, Chama* spp., *Thalamita* spp., holoturias diversas	Zona de cría y madriguera del pez loro cototo verde *(Bolbometopon muricatum)* de diversas clases de tamaño
Sagauru Kokorapa I	Arrecife poco profundo con cabezas de coral *Porites* diversas, sustrato arenoso y pastos marinos Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae	*Lutjans gibbus/L. adetti, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lutjanus fulvus, Epinephelus ongus, Lethrinus hypselopterus, Pseudobalistes flavimarginatus,* Balistoides viridescens, Choerodon anchorago	*Anadara antiquata, B. semiorbiculata, Gafrarium tumidum, Thalamita* spp., *Caulerpa* spp., holoturias diversas	Zona de desove del pargo jorobado (*Lutjanus gibbus)*

Sagauru Kokorapa II	Banco de arena con praderas marinas extensas de Cymodoceaceae e Hydrocharitaceae	*Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Lutjanus gibbus/L. adetii, Sphyraena barracuda, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Choerodon anchorago, Scolopsis monogramma, Pentapodus* spp. *Valamugil seheli,* carángidos diversos	*B.semiorbiculata, Andara antiquata, Gafrarium tumidum, Caulerpa* spp., holoturias diversas	Ninguno
Hioko	Arrecife de profundidad media con colonias extensas de *Porites cylindrica coral* y algunos escombros de coral	*Bolbometopon muricatum, Lutjanus gibbus/L. adetii, Lutjanus fulvus, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Sphyraena* spp., *Monotaxis grandoculi*	*B* *.semiorbiculata, Thalamita* spp., *Caulerpa* spp., holoturias diversas	Zona de cría y madriguera del pez loro cototo verde (*Bolbometopon muricatum)* de diversas clases de tamaños
Sagauru Onone	Banco de arena poco profundo con algunos escombros de coral, cabezas de coral *Porites,* y algunas praderas marinas de Cymodoceaceae e Hydrocharitaceae	*Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Lethrinus olivaceus, Sphyraena barracuda, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Choerodon anchorago*	*Anadara antiquata, Gafrarium tumidum, B. semiorbiculata, Antigona* spp., *Caulerpa* spp., holoturias diversas	Ninguna

Sagaur Kokoqana	Arrecife poco profundo con cabezas de coral *Porites,* sustrato arenoso mezclado con sieno y praderas marinas de *Cymodoceaceae* e *Hydrocharitaceae* principalmente	*Lutjanus gibbus/L. adetii, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Sphyraena barracuda, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Choerodon anchorago, Scolopsis monogramma, Pentapodus* spp., *Valamugil seheli,* carángidos diversos	*Lutjanus gibbus/L. adetii, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Sphyraena barracuda, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Choerodon anchorago, Scolopsis monogramma, Pentapodus* spp., *Valamugil seheli,* carángidos diversos	Cardúmenes de arenque (*Herklotsichthys quadrimaculatus)* comúnmente avistados durante la luna llena
Sagauru Mudala	Arrecife de profundidad media con cabezas de coral *Porites,* algunas colonias de *Acropora* y *Polites cylindrica,* praderas marinas de *Cymodoceaceae* y *Hydrocharitaceae* principalmente, y sustratos de sieno/ arena	/ *Lutjanus gibbus/L. adetii, Lutjanus argentimaculatus, Lutjanus carponotatus, Lutjanus fulvus, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus olivaceus, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens,* carángidos diversos, serránidos diversos	*Antigona* spp., *Hyotissa hyotis, Spondylus* spp., *Pinctada magaritifera, Acrosterigma* spp., *Chama* spp., *Pinna* spp., *B. semiorbiculata, Thalamita* spp., *Panulirus versicolor,* holoturias diversas	Las tortugas y los dugongos comúnmente se observan aquí. Grupos de pez cirujano azul (*Acanthurus* spp.) se observan comúnmente en el forrajeo
Sagauru Ililaka	Arrecife de profundidad media con numerosas cabezas de coral *Porites* y algunas colonias coralinas *Acropora* y *Porites cylindrica.* Pendiente hacia el canal de la laguna / *Lutjanus gibbus*	*L. adetii, Lutjanus argentimaculatus, Lutjanus carponotatus, Lutjanus fulvus, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus olivaceus, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens,* carángidos diversos, serránidos diversos	*Antigona* spp., *Hyotissa hyotis, Spondylus* spp., *Pinctada magaritifera, Acrosterigma* spp., *Chama* spp., *Pinna* spp., *B. semiorbiculata, Thalamita* spp., *Panulirus versicolor,* holoturias diversas	Zona de desove del pargo jorobado

Nuestro estudio también reveló algunas sutilezas en el patrón espacial intrahábitat. En Baraulu, durante la estación de marea alta diurna (sección central en la columna izquierda de la Figura 8) las tasas de rendimiento neto para casi todos los descensos del arrecife externos aumentaron en comparación con la estación de marea baja diurna (sección superior en la columna izquierda de la Figura 8). Pero en términos de asignación global de tiempo, aunque hubo un aumento general en la asignación global de tiempo en el hábitat de los descensos del arrecife externos, como se predijo por el modelo de selección de parche, gran parte de este se concentró en un único caladero al sureste de la entrada de la laguna (mapa central, columna derecha, Figura 8). La representación visual hizo más evidentes este tipo de detalles y, por tanto, nos permitió comprender mejor la variabilidad intrahábitat y las respuestas y estrategias humanas para hacer frente a esta variabilidad. De hecho, si la escala del sistema aumenta de varias docenas de caladeros, como en estos ejemplos, a varios cientos o miles (como estamos llevando a cabo en la actualidad), las capacidades de visualización del SIG para dar sentido a los patrones espaciales se vuelven aún más potentes. Gracias a la visualización, ahora podemos ver con mayor profundidad y lejanía en conjuntos de datos mayores, lo que permite plantear preguntas que antes no eran evidentes.

Discusión

El planteamiento presentado en este documento puede ayudar a seleccionar lugares para establecer áreas marinas protegidas. La referenciación geoespacial de los conocimientos ecológicos indígenas ayuda en la identificación espacial de la diversidad (o ausencia de ella) de los hábitats, en la representación biogeográfica (cuando la delimitación de los hábitats se hace a gran escala) y en la identificación de hábitats y etapas vitales vulnerables (conceptualizadas como la asociación entre la estructura del hábitat y el tamaño y distribución de las especies), sitios de especies raras o en peligro de extinción, y ubicaciones de especies explotadas. Estos conocimientos pueden utilizarse para seleccionar los lugares en función de su calidad y representación general del hábitat y para incorporar de for-

ma concomitante los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad, incluida la presencia de especies explotables, etapas vitales vulnerables e interconectividad entre hábitats (Roberts *et al*., 2003).

Figura. 8. Características espaciotemporales de la pesca artesanal alrededor del pueblo de Baraulu (la tasa promedio de rendimiento estacional para los caladeros de los diferentes tipos de hábitat se muestra en el lado izquierdo de la figura y el porcentaje de la asignación global de tiempo estacional para esos mismos caladeros se muestra en el lado derecho).

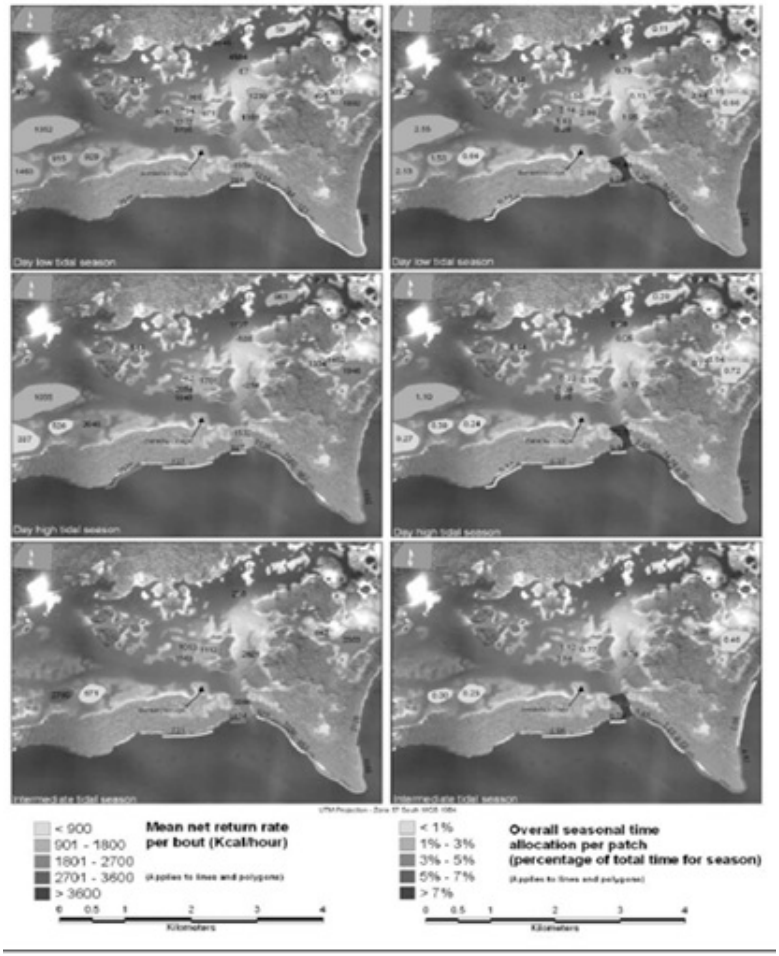


Tabla 3 - Características generales de las áreas biofísicas delimitadas dentro del Área Marina Protegida del pueblo de Nusa Hope (basadas en el conocimiento local)

Nombre del caladero	Características Generales	Especies de presa comunes (peces)	Especies de presa comunes (otras)	Acontecimientos biológicos significativos
Sagauru Nusa Hope	Arrecife poco profundo y de profundidad media con algunas cabezas de coral *Porites* y colonias vivas y muertas de coral *Acropora, Millepora, Faviidae, Agariciidae* y *Pocillopora.* También algunos escombros de coral y sieno mezclado con pastos marinos Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae. Pendiente hacia el canal de la laguna	*Bolbometopon muricatum, Cheilinus undulatus, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Lethrinus hypselopterus, Lethrinus erythracanthus, Lethrinus olivaceous, Lutjanus gibbus/L. adetii, Monotaxis grandoculis,* serránidos diversos, carángidos diversos	*B. semiorbiculata, Lopha cristagalli, Thalamita* spp., *Caulerpa* spp. *Spondylus* spp., holoturias diversas	Zona de desove importante del pez ballesta (*Pseudobalistes flavimarginatus* y *Balistoides viridescens).* También, el pez loro cototo verde (*Bolbometopon muricatum)* excava aquí por la noche.
Sagauru Varu	Arrecife poco profundo con cabezas de coral *Porites,* sustrato arenoso mezclado con escombros de coral. Pendiente hacia el canal de la laguna con especies mixtas de coral	*Lethrinus obsoletus, Lethrinus harak, Lutjanus gibbus/L. adetii, Lutjanus rivulatus, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Monotaxis grandoculis, serránidos diversos, carángidos diversos*	*B. semiorbiculata*, *Pinctada margaritifera, Lopha cristagalli, Pinna* spp., holoturias diversas	Aquí se produce la agregación de desove del mero de coral de cola cuadrada (*Plectropomus areolatus).* También, posiblemente de *Epinephelus fuscoguttatus* y *E. polyphekadion**

Sagauru Heloro	arrecife poco profundo y de profundidad media con algunas cabezas de coral *Porites* y colonias coralinas *Acropora Millepora, Faviidae, Agariciidae* y *Pocillopora* vivas y muertas. También, algunos escombros de coral y siendo mezclado con pastos marinos Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae. Pendiente hacia el canal de la laguna	*Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Lethrinus olivaceous, Lutjanus gibbus/L. adetii, Lutjanus rivulatus, Lutjanus argentimaculatus,* serránidos diversos, carángidos diversos	*B. semiorbiculata, Lopha cristagalli, Anadara antiquata, Gafrarium tumidum, Thalamita* spp., *Caulerpa* spp., *Spondylus* spp, *Pinctada magaritifera,* holoturias diversas	Zona importante de nidificación del pez ballesta (*Pseudobalistes flavimarginatus* y *Balistoides viridescens)*
Soviti	Banco de arena poco profundo con praderas marinas Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae. Coral *Porites* vivos y muertos. El banco de arena va en pendiente hacia un descenso de sieno. La zona también está bordeada de manglares	*Lutjans gibbus/L. adetii, Lethrinus harak, Lethrinus obsoletus, Lethrinus hypselopterus, Sphyraena barracuda, Pseudobalistes flavimarginatus, Balistoides viridescens, Choerodon anchorago,* Scolopsis monogramma, Pentapodus spp., *Valamugil seheli,* carángidos diversos	*B. semiorbiculata, Andara antiquata, Andara granosa, Gafrarium tumidum, Nassarius camelus, Saccostrea cucullata, Caulerpa* spp., *Scylla serrata,* holoturias diversas	Ninguno

* Comunicación personal de Richard Hamilton (también basada en IEK)[8].

8 N. de T.: La abreviatura "IEK" hace referencia al Indigenous Ecological Knowledge.

Asimismo, la georreferenciación del comportamiento pesquero permite visualizar las pautas espacio-temporales de explotación de los recursos humanos (cambios estacionales en el equipo de pesca), las respuestas humanas a la variabilidad del rendimiento relativo inter e intrahábitat (determinada por los índices de capturas) y la influencia de esta variabilidad en las estrategias pesqueras, así como las amenazas humanas para determinados hábitats marinos. Esta información puede ayudar a diseñar cierres permanentes y estacionales modelados de acuerdo con los patrones estacionales de forrajeo.

En Baraulu, por ejemplo, la entrada era la zona más utilizada durante todo el año y el área que, en promedio, proporcionaba la tasa promedio de mayor rendimiento por hora de forrajeo (Figura 8). El establecimiento de una AMP en esta zona se habría topado con la resistencia de la comunidad, dado que un cierre interferiría con las actividades locales de subsistencia y privaría a la gente de su principal fuente de proteínas.[9] El lugar seleccionado para la AMP solo se utilizaba de forma intensa durante la estación de marea baja y, por tanto, era menos vital para la subsistencia que la entrada, lo que hizo que su cierre fuera más aceptable en la localidad. En el caso de Nusa Hope, sin embargo, la representación visual del SIG ilustraba que el hábitat del arrecife de la laguna interior era de vital importancia para la subsistencia. Dado que existen múltiples lugares productivos en las proximidades y que la zona de arrecifes de Heloro no se explota de forma intensiva (en la Figura 9, nótese que no la utilizaron los pescadores muestreados en 1994-1995), el cierre de la zona era, no obstante, más aceptable para la población local. La representación visual del SIG hizo más evidentes las diferencias espacio-temporales en los patrones de pesca humana de lo que habría sido el caso si solo se hubiera recurrido a entrevistas o a la participación en las actividades pesqueras de la gente. Esto hizo que el plan de gestión resultara menos perjudicial para las pautas de subsistencia locales, más participativo (mediante el mapeo

9 El cierre de la entrada de Baraulu no tendría mucho sentido biológico de cualquier manera, dado que la entrada es una zona de tránsito para múltiples especies pelágicas. Sin embargo, existen otras entradas en Roviana que son más significativas biológicamente, ya que albergan una serie de agregaciones de desove.

participativo y la interpretación conjunta de los resultados del SIG) y, por tanto, más aceptable en general. Además, generó mapas de las pautas locales de forrajeo que podían mostrarse en la localidad para ayudar en el proceso de designación de las AMP. Por último, el análisis también hizo más evidentes las diferencias en las estrategias de forrajeo entre los distintos pueblos, y así los alertó de los peligros de utilizar estrategias de pesca localizadas para inferir patrones lagunares más generales. Cabe señalar que la información recopilada mediante la intersección de herramientas espaciales, trabajo de campo antropológico y ciencias sociales y naturales se cita a menudo como criterio fundamental para la selección de emplazamientos de las reservas marinas y para establecer redes de AMP (Friedlander *et al*., 2003; Halpern, 2003; Roberts y Hawkins, 2000; Roberts *et al*., 2003).

No ofrecemos esta cartografía de los conocimientos ecológicos indígenas y los patrones de forrajeo mediante SIG participativos como un sustituto absoluto de la investigación de mapeo de hábitats de la ciencia marina para el diseño de AMP. También reconocemos que los conocimientos ecológicos indígenas sobre procesos biológicos (por ejemplo, agregaciones de desove) no siempre son precisos y, en algunos casos, deberían validarse científicamente. No obstante, sugerimos que en ausencia de información científica marina completa, como ocurre en muchas de las zonas del Pacífico Occidental (Johannes, 1998), nuestros métodos pueden utilizarse en las localidades para diseñar AMP (lo ideal, por supuesto, es integrar ambas formas de conocimiento).

Tabla 4. Porcentaje de asignación global de tiempo a diferentes hábitats entre los pescadores de Baraulu y Nusa Hope a lo largo las estaciones de marea en un año (1994-95)

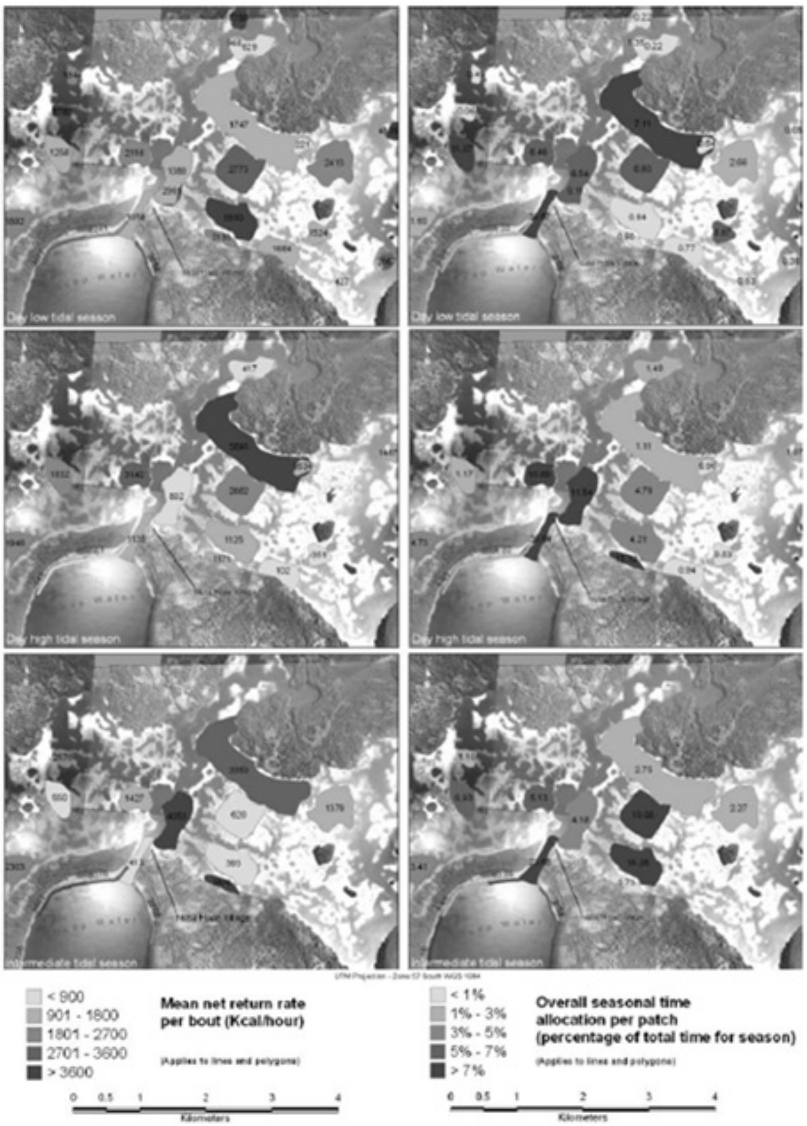
Estaciones de marea	Pueblo de Baraulu	Pueblo de Nusa Hope
Marea baja diurna		
Arrecifes del interior	21.7	55.3
Arrecifes del exterior	20.2	7.4
entrada	57.4	36.4
Marea alta diurna		
Arrecifes del interior	5.7	58.6
Arrecifes del exterior	21.5	2.7
entrada	72.6	38.6
Intermedios		
Arrecifes del interior	9.1	51.5
Arrecifes del exterior	12.1	24.3
entrada	78.8	23.5

Cada vez son más los estudiosos que reclaman la inclusión de los conocimientos ecológicos indígenas y la participación local en el diseño de programas de conservación (Poizat y Baran, 1997; Silvano y Begossi, 2005). Sin embargo, hay pocos estudios de caso que ofrezcan ejemplos prácticos de cómo los conocimientos ecológicos indígenas (Anuchiracheeva *et al*., 2003) y el comportamiento socioecológico pueden hacerse operativos en un contexto de gestión de recursos mediante la intersección de diversos enfoques de investigación natural y social y la geomática.

Las AMP de Baraulu y de Nusa Hope se crearon en 2002 para: (1) preservar hábitats representativos de arrecifes poco profundos de la laguna; (2) proporcionar un lugar seguro para el pez loro cototo verde, así como para otras especies amenazadas (por ejemplo, tortugas que pastan en las praderas marinas de las AMP); (3) salvaguardar las zonas de cría del pez loro cototo verde; (4) proteger las zonas de desove de varias especies, y (5) permitir la restauración ecológica de los hábitats dentro de las AMP.

De hecho, a cierto nivel, los conocimientos ecológicos indígenas son más bastos y anecdóticos que las pruebas científicas. Sin embargo, cabe señalar que un estudio científico para evaluar de forma independiente la estructura de los hábitats en la AMP de Baraulu demostró que la interpretación indígena de fotografías aéreas del bentos coincide de forma estrecha con los resultados de la investigación científica marina convencional (estudios de campo y buceo con cuadrantes). El índice de precisión de la interpretación indígena de fotos aéreas osciló entre el 70 y 80% para una clasificación moderadamente detallada de los bentos, que incluía nueve clases bentónicas abióticas y bióticas definidas en las localidades. Esta correspondencia es prometedora, dado que corrobora una predicción intuitiva según la cual el conocimiento ecológico indígena, como forma de ciencia inductiva, no es ontológicamente incongruente con el conocimiento científico occidental. Desde el punto de vista de los expertos occidentales, es una reserva adecuada de conocimientos (para la población local es un conocimiento integrado en y apropiado a su cultura, en cualquier caso) que puede complementar los esfuerzos para delinear y diseñar AMP y otras medidas de conservación. En nuestro caso, se utilizaron pocos datos científicos de referencia para diseñar las AMP de Baraulu y Nusa Hope, pero los resultados del seguimiento científico *a posteriori* han demostrado el valor de una estrategia de gestión preventiva que se basa en gran medida en los conocimientos locales. Esta experiencia debería ser útil para los biólogos de conservación y los gestores pesqueros que trabajan en contextos sin datos.

Figura 9. Características espaciotemporales de la pesca artesanal en los alrededores del pueblo de Nusa Hope (la tasa promedio de rendimiento neto estacional de los caladeros de los distintos tipos de hábitat se muestra en la parte izquierda de la figura, y el porcentaje del tiempo global de forrajeo estacional en esos mismos caladeros se muestra en la parte derecha).



De hecho, carecemos de datos sobre el ciclo vital y las características de dispersión de larvas y adultos de la mayoría de las especies, que serían necesarios para tomar decisiones plenamente fundamentadas en el plano científico a la hora de designar las AMP (Botsford *et al*., 2003). No obstante, creemos que nuestro enfoque integrador de las ciencias naturales y sociales para seleccionar los emplazamientos de las AMP y situarlos en sistemas de red puede arrojar resultados biológicos y sociales positivos. Desde el punto de vista biológico, esperamos que la red de reservas proteja hábitats representativos y organismos marinos explotados, a la vez que mejore el rendimiento de la pesca artesanal. Una red de pequeñas reservas en la laguna es fundamental para proteger las fases vulnerables del ciclo vital de muchos peces de arrecife de coral muy explotados. Las larvas de estos peces se asientan predominantemente fuera del plancton en biotopos de aguas poco profundas de gran complejidad estructural, como manglares y praderas marinas (Nagelkerken *et al*., 2000). La importancia de la función de la laguna como criadero para las especies de peces de arrecifes de coral de esta región puede deducirse de las altas densidades de juveniles en la laguna interior, en contraste con su ausencia total en las zonas de arrecifes de coral de la laguna exterior (Aswani y Hamilton, 2004b; Hamilton, 2004). Cada vez hay más datos de modelos teóricos que sugieren que las redes de reservas crean amortiguadores contra las particularidades de la variabilidad ambiental y proporcionan una protección significativamente mayor a las comunidades marinas que las reservas individuales (Hastings y Botsford, 2003; Roberts *et al*., 2003).

Los resultados biológicos de las AMP[10] son un medio tangible de demostrar a la sociedad la importancia de la gestión de los recursos y la protección del ambiente. De manera fundamental, al ser testigos de un cambio ambiental

10 Nuestros primeros esfuerzos de seguimiento muestran que, aunque la densidad de peces entre las AMP y las no AMP no es muy diferente, los peces tienden a ser más grandes dentro de las AMP. Dado que las reservas solo tienen de dos a tres años de antigüedad, se necesitarán más controles para determinar si las AMP tienen o no un efecto biológico significativo (comunicación personal de Ben Halpern). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tres años de seguimiento de almejas rey y tejillarca granosa en la zona Baraulu han mostrado diferencias estadísticamente significativas en la abundancia y distribución por tamaños de estos bivalvos entre los lugares de acceso abierto y cerrado (véase Aswani y Weiant, 2004).

positivo (ya sea real o percibido), se anima a la población roviana a adoptar prácticas de forrajeo más sostenibles, lo que, a su vez, aumenta los niveles de seguridad alimentaria y salud ambiental y humana, y reduce los conflictos por los recursos en toda la región.[11] En resumen, nuestro enfoque impulsado por las partes interesadas: (1) se basa en los principios de precaución y gestión adaptativa (en la actualidad estamos evaluando diversos resultados biológicos y sociales de nuestra estrategia para afinar el diseño de nuestra red de AMP) (Johannes, 1998; Parma *et al*., 1998); (2) depende en gran medida de los procesos socioeconómicos, políticos, culturales y ecológicos locales, y (3) es una fuerza compensatoria contra la mala gestión humana del medio marino. Por último, la capacidad de los SIG para traducir la información a un formato accesible e interpretable es importante para los investigadores, sobre todo cuando trabajan en zonas del mundo en vías de desarrollo donde diversas partes interesadas, como autoridades gubernamentales, grupos conservacionistas, defensores de los derechos indígenas, científicos y población local, participan en las decisiones de gestión. Respaldamos el uso de los SIG en las labores de conservación, aunque aceptamos algunas críticas al uso de estas tecnologías (Craig *et al*., 2002; Harris y Weiner, 1998; Obermeyer, 1998; Pickles, 1995), en particular las que sostienen que el creciente uso de los SIG en los proyectos puede exacerbar las diferencias de poder entre los fuereños y la población local y marginar aún más a esta última en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, mediante los "SIG de participación pública" (Poole, 1995; Robbins, 2003), se pueden mejorar estas asimetrías. Los científicos sociales y naturales pueden emplear técnicas de mapeo participativas (Herlihy y Knapp, 2003) y tecnologías de SIG para ayudar a los pueblos indígenas mediante la coproducción de mapas que ayuden a presentar las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus tierras y mares, para permitir la gestión de los recursos mediante la incorporación de los conocimientos culturales y los valores ecológicos locales (Flanagan y Laituri, 2004), para emplear el mapeo participativo en la educación local sobre el ambiente y los recursos (Herlihy, 2003), y para

11 El análisis preliminar de los datos de una encuesta sobre salud y nutrición realizada en Roviana en 2005 sugiere que las AMP no están teniendo efectos adversos y que, en algunos casos, mejoran la nutrición local (Aswani y Furusawa, datos sin publicar).

estudiar la biodiversidad y diseñar programas de conservación (Poole, 1995). Los investigadores pueden crear mapas de hábitats y zonas de conservación locales que representen los paisajes marinos naturales y sociales conocidos y delimitados por la población indígena. En este caso, los límites de las AMP eran temas polémicos y queríamos mantener el máximo nivel de precisión cuando las comunidades decidieron al final dónde se trazarían los límites. Al principio, con la ayuda de los miembros de cada una de las comunidades, trazamos los límites de las AMP en torno a los hábitats estudiados antes (utilizando los métodos descritos en este documento). A continuación, en reuniones comunitarias, las respectivas comunidades revisaron estos mapas impresos para asegurarse de que estaban de acuerdo con los límites. Con la aprobación de las comunidades, los mapas de cada AMP se colocaron en lugares públicos (aeropuerto, iglesias, salas de juntas, etc.) en las lagunas de Roviana y Vonavona para que toda la comunidad de la laguna tuviera conocimiento del establecimiento de las áreas protegidas. Como ayuda visual, estos mapas impresos resultaron muy valiosos porque la población local podía reconocer de forma fácil las zonas protegidas y los hábitats y especies objeto de gestión y conservación. Para profundizar y ampliar la participación de las comunidades locales en la gestión de sus recursos marinos y en la contextualización local de los derechos de tenencia del mar, en la actualidad estamos capacitando a nuestros coordinadores locales en el uso de SIG y suministrando computadoras y programas de SIG a varios pueblos y escuelas locales.

Recientemente se ha cuestionado la eficacia general de la gestión comunitaria y los esquemas participativos como los descritos con anterioridad (Barrett *et al*., 2001; Kellert *et al*., 2000). Aunque este debate queda fuera del alcance del presente documento, merece la pena hacer hincapié en que el fracaso de los proyectos de gestión comunitaria suele deberse a la ejecución ineficaz de los planes de cogestión (a varios niveles) entre las comunidades locales y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales externas. Es decir, las agencias externas suelen integrar de forma insatisfactoria a los grupos interesados locales (que a menudo están enfrentados) en los procesos de designación, puesta en marcha, gobernanza, gestión y supervisión relacionados con las áreas protegidas comunitarias. Como señala

Berkes (2004: 692), para que la gestión comunitaria funcione, los organismos externos deben compartir con las comunidades locales de forma veraz y transparente (o con los diversos grupos de interesados que compiten entre sí) "el poder y la responsabilidad de la gestión —en contraposición a la consulta simbólica y la participación pasiva"— y deben crear un contexto "que fomente el aprendizaje y la gestión y genere confianza mutua". El ejemplo del SIG participativo que se ilustra en este trabajo muestra los cauces por los que pueden empezar a construirse esas articulaciones participativas. Confiamos en la veracidad de esta afirmación porque nuestra evaluación del impacto social (SIA) de 2005 muestra índices de un apoyo local a las AMP de entre 70 y 90% en todos los pueblos de la región.

Conclusión

La capacidad de los SIG para almacenar, recuperar, analizar y mostrar las características espaciales de sistemas complejos los convierte en una excelente herramienta de análisis especial para profundizar en el conocimiento de las dimensiones socioecológicas que caracterizan a un sistema —una comprensión que permite ofrecer mejores soluciones de gestión para problemas sociales y ambientales complejos—. En este artículo, mostramos cómo los SIG pueden integrarse con un análisis ecológico humano más amplio para revelar los patrones espaciales y temporales del conocimiento ecológico y el comportamiento pesquero de los pescadores de Roviana. Por medio de la consulta y posterior visualización de nuestros datos mediante SIG, empleamos herramientas de análisis espacial que permiten la visualización y el reconocimiento de patrones. Mostrar los datos de este modo resulta en particular eficaz a la hora de trabajar con poblaciones locales en situaciones en las que las ayudas visuales contribuyen a salvar la brecha entre el conocimiento indígena local y el conocimiento científico. De hecho, los datos utilizados para ilustrar estos ejemplos se recopilaron a lo largo de un periodo superior a diez años. Sin embargo, con una planificación logística y de investigación adecuada, estos métodos pueden aplicarse con éxito durante varios meses de trabajo de campo y pueden utilizarse en la mayoría de los contextos marinos o terrestres del mundo. Además, la reciente reducción del precio de las computadoras capaces de

ejecutar eficazmente programas de SIG y la amplia disponibilidad de equipos GPS e imágenes por satélite de bajo costo han puesto los SIG al alcance de la mayoría de los investigadores.

En conclusión, los análisis integrados parecen tanto más urgentes considerando que en la última década las ciencias sociales y naturales han hecho hincapié en las dimensiones humanas del cambio ambiental. Los SIG encierran un gran potencial para los antropólogos aplicados, que pueden dar a las dimensiones históricas y culturales tanta importancia como a las biofísicas en las iniciativas de conservación y gestión de recursos. En nuestro caso, la cartografía del paisaje marino por medio de la investigación participativa ha permitido gestionar los recursos mediante el uso de los conocimientos y valores ecológicos locales dentro de un sistema que integra como equivalentes las formas de conocimiento indígenas y occidentales. Debido a la creciente popularidad de las AMP como herramienta de gestión y conservación pesquera en todo el mundo, ahora es de fundamental importancia diseñarlas integrando de forma más exhaustiva múltiples enfoques de investigación. También es esencial que ofrezcamos a las partes interesadas que van a tener que aceptar o rechazar un área marina protegida la misma voz en su diseño, delimitación, ejecución y supervisión. Solo entonces podremos lograr regímenes de gestión en verdad participativos y que mantengan los recursos biológicos y sociales a largo plazo.

Referencias[12]

Aldenderfer, M. y H. D. G. Maschner (eds.). (1996). *Anthropology, space, and geographic information systems*. Oxford University Press.

Anuchiracheeva, S., H. Demaine, G. P. Shivakoti y K. Ruddle. (2003). Systematizing local knowledge using gis: fisheries management in Bang Saphan Bay, Thailand. *Ocean & Coastal Management*, *46*, 1049-1068.

12 N. de T. Algunas referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias difieren de las referencias presentes en el artículo original.

Appeldoorn, R. S. (1996). Model and method in reef fishery assessment. En N. V. C. Polunin y C. M. Roberts (eds.). *Reef fisheries* (219-248). Chapman & Hall.

Aswani, S. (1997). *Customary sea tenure and artisanal fishing in the Roviana and Vonavona Lagoons: Solomon Islands. The evolutionary ecology of marine resource utilization* [tesis doctoral, University of Hawaii].

Aswani, S. (1998a). Patterns of marine harvest effort in Southwestern New Georgia, Solomon Islands: resource management or optimal foraging? *Ocean & Coastal Management*, *40*, 207-235.

Aswani, S. (1998b). The use of optimal foraging theory to assess the fishing strategies of Pacific Island artisanal fishers: a methodological review. *Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin*, *9*, 21-26.

Aswani, S. (1999). Common property models of sea tenure: a case study from the Roviana and Vonavona Lagoons, New Georgia, Solomon Islands. *Human Ecology*, *27*, 417-453.

Aswani, S. (2002). Assessing the effect of changing demographic and consumption patterns on sea tenure regimes in the Roviana Lagoon, Solomon Islands. *Ambio*, *31*, 272-284.

Aswani, S. (2005). Customary sea tenure in Oceania as a case of rights-based fishery management: Does it work? *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 15(3), 285–307.

Aswani, S., M. Lauer, P. Weiant, L. Geelen y S. Herman. (2004). *The Roviana and Vonavona marine resource management project. Final report, 2000-2004.* Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara.

Aswani, S. y M. Lauer. (s.f.). *Habitat mapping using local aerial photo interpretation and resident taxa inventories: a reliable method for designing marine protected areas?*

Aswani, S. y P. Weiant. (2004). Scientific evaluation in women's participatory management: monitoring marine invertebrate refugia in the Solomon Islands. *Human Organization*, *63*, 301-319.

Aswani, S. y R. J. Hamilton. (2004a). Integrating indigenous ecological knowledge and customary sea tenure with marine and social science for conservation of bumphead parrotfish (*Bolbometopon muricatum*) in the Roviana Lagoon, Solomon Islands. *Environmental Conservation*, *31*, 1-15.

Aswani, S. y R. J. Hamilton. (2004b). The value of many small vs. few large marine protected areas in the Western Solomons. *Traditional Marine Resource Management Knowledge Information Bulletin*, *16*, 3-14.

Balram, S., S. Dragicevic y T. Meredith. (2004). A collaborative GIS method for integrating local and technical knowledge in establishing biodiversity conservation priorities. *Biodiversity and Conservation*, *13*, 1195-1208.

Barrett, C. B., K. Brandon, C. Gibson y H. Gjertsen. (2001). Conserving tropical biodiversity amid weak institutions. *BioScience*, *51*, 497-502.

Bates, R. y B. James. (2002). Marine GIS for management of Scottish marine special areas of conservation. En J. Breman (ed.). *Marine geography: GIS for the oceans and seas* (233–246). ESRI Press.

Begossi, A. (2001). Mapping spots: fishing areas or territories among islanders of the Atlantic Forest (Brazil). *Regional Environmental Change*, *2*, 1-12.

Berkes, F. (2004). Rethinking community-based conservation. *Conservation Biology*, *18*, 621-630.

Bird, R. y D. W. Bird. (1997). Delayed reciprocity and tolerated theft: the behavioral ecology of food sharing strategies. *Current Anthropology*, *38*, 49-78.

Botsford, L. W., F. Micheli y A. Hastings. (2003). Principles for the design of marine reserves. *Ecological Applications*, *13*, s25-31.

Bowman, D., A. Wash y L. D. Prior. (2004). Landscape analysis of aboriginal fire management in Central Arnhem Land, North Australia. *Journal of Biogeography*, *31*, 207-223.

Censo Nacional (1999). *Report on population and housing census.* Solomon Islands Government, Honiara, Statistics Office.

Conant, F. P. (1994). Human ecology and space age technology: some predictions. *Human Ecology*, *22*, 405-413.

Craig, W. J., T. M. Harris y D. Weiner. (2002). *Community participation and geographic information systems.* Taylor & Francis.

English, S., C. Wilkinson y V. Baker. 1997. *Survey manual for tropical marine resources*, segunda edición. Australian Institute of Marine Science.

Flanagan, C. y M. Laituri. (2004). Local cultural knowledge and water resource management: the Wind River Reservation. *Environmental Management*, *33*, 262-270.

Franklin, E. C., J. S. Ault y S. G. Smith. (2002). Utilization of GIS in a fisheries assessment and management system. En J. Brenam (ed.). *Marine geography: GIS for the oceans and seas* (109–126). ESRI Press.

Friedlander, A., J. Sladek Nowlis, J. A. Sanchez, R. Appeldoorn, P. Usseglio, C. McCormick, S. Bejarano y A. Mitchell-Chui. (2003). Designing effective marine protected areas in Seaflower Biosphere Reserve, Colombia, based on biological and sociological Information. *Conservation Biology*, *17*, 1769-1784.

Halpern, B. (2003). The impact of marine reserves: do reserves work and does reserve size matter? *Ecological Applications*, *13*, s117-137.

Hamilton, R. J. (2004). *The demographics of bumphead parrotfish (*Bolbometopon muricatum*) in lightly and heavily fished regions of the Western Solomon Islands* [tesis de doctorado, University of Otago, Dunedin].

Harris, T. y D. Weiner. (1998). Empowerment, marginalization, and "community integrated" GIS. *Cartography and Geographic Information Systems*, *25*, 67-76.

Hastings, Al. y L. W. Botsford. (2003). Are marine reserves for fisheries and biodiversity compatible? *Ecological Applications*, *13*, S65-S70.

Herlihy, P. H. (2003). Participatory research mapping of indigenous lands in Darién, Eastern Panama. *Human Organization*, *62*, 315-331.

Herlihy, P. H. y G. Knapp. (2003). Maps of, by, and for the people in Latin America. *Human Organization*, *62*, 303-314.

Hodgson, G., L. Maun y C. Shuman. (2003). *Reef check survey manual for coral reefs of the Indo Pacific, Hawaii, Atlantic/Caribbean, Red Sea and Arabian Gulf.* Institute of the Environment, University of California, Los Angeles, USA.

Jiang, H. (2003). Stories remote sensing images can tell: integrating remote sensing analysis with ethnographic research in the study of cultural landscapes. *Human Ecology*, *31*, 215-232.

Johannes, R. E. (1998). The case for data-less marine resource management: example from tropical nearshore finfisheries. *Trends in Ecology and Evolution*, *13*, 243-246.

Kellert, S. R., J. N. Mehta, S. A. Ebbin y L. L. Lichtenfeld. (2000). Community natural resource management: promise, rhetoric, reality. *Society and Natural Resources*, *13*, 705-715.

MacArthur, R. H. y E. R. Pianka. (1966). On optimal use of a patchy environment. *American Naturalist*, *100*, 603-609.

Mark, D. M. y A. G. Turk. (2003). Landscape categories in Yindjibarndi: ontology, environment, and language. En W. Kuhn, M. Worboys y S. Timpf (eds.), *Spatial information theory: foundations of geographic information science* (28-45). Springer-Verlag.

Mohamed, M. A. y S. J. Ventura. (2000). Use of geomatics for mapping and documenting indigenous tenure systems. *Society and Natural Resources*, *13*, 223-236.

Morán, E. F., E. Brondizio, P. Mausel y Y. Wu. (1994). Integrating Amazonian vegetation, land-use, and satellite data. *BioScience*, *44*, 329-338.

Mumby, P. J., D. A. Gray, J. P. Gibson y P. S. Raines. (1995). Geographic information systems: a tool for integrated coastal zone management in Belize. *Coastal Management*, *23*, 111-121.

Nagelkerken, I., M. Dorenbosch, W. Verberk, E. Cocheret de la Moriniere y G. van der Velde. (2000). Importance of shallow-water biotopes

of a Caribbean bay for juvenile coral reef fishes: patterns in biotype association, community structure and spatial distribution. *Marine Ecology Progress Series*, *202*, 175-192.

Nietschmann, B. (1995). Defending the Miskito reefs with maps and GPS: mapping with sail, SCUBA, and satellite. *Cultural Survival Quarterly*, *18*, 34-36.

Nyerges, E. A. y G. M. Green. (2000). Ethnography of landscape: GIS and remote sensing in the study of forest change in West African Guinea savanna. *American Anthropologist*, *102*, 271-289.

Obermeyer, N. J. (1998). Evolution of public participation GIS. *Cartography and Geographic Information Systems*, *25*, 665-666.

Parma, A. M., P. Amarasekare, M. Mangel, J. Moore, W. Murdoch, E. Noonburg, M. A. Pascual, H. Possingham, K. Shea, C. Wilcox y D. Yu. (1998). What can adaptive management do for our fish, forests, food, and biodiversity? *Integrative Biology*, *1*, 16-26.

Pickles, J. (1995). *Ground truth: the social implications of geographic information systems.* Guilford Press.

Poizat, G. y E. Baran. (1997). Fishermen's knowledge as background information in tropical fish ecology: a quantitative comparison with fish sampling results. *Environmental Biology of Fishes*, *50*, 435-449.

Poole, P. (1995). Geomatics: who needs it? *Cultural Survival*, *18*, 1-2.

Robbins, P. (2003). Beyond ground truth: GIS and environmental knowledge of herders, professional foresters, and other traditional communities. *Human Ecology*, *31*, 233-254.

Roberts, C. M. (2000). Selecting marine reserve locations: optimality versus opportunism. *Bulletin of Marine Science*, *66*, 581-592.

Roberts, C. M., S. Andelman, G. Branch, R. H. Bustamante, J. C. Castilla, J. Dugan, B. S. Halpern, K. D. Lafferty, H. Leslie, J. Lubchenco, D. McArdle, H. P. Possingham, M. Ruckelshaus y R. R. Warner. (2003). Ecological criteria for evaluating candidate sites for marine reserves. *Ecological Applications*, *13*, s199-214.

Roberts, C. M. y J. P. Hawkins. (2000). *Fully protected marine reserves: a guide.* World Wildlife Fund / University of York.

Rundstrom, R. (1995). GIS, indigenous peoples, and epistemological diversity. *Cartography and Geographic Information Systems*, *22*, 45-57.

Schweik, C. M. (2000). Optimal foraging, institutions, and forest change: a case from Nepal. *Environmental Monitoring and Assessment*, *62*, 231-260.

Silvano, R. y A. Begossi. (2005). Local knowledge on a cosmopolitan fish: ethnoecology of *Pomatomus saltatrix* (Pomatomidae) in Brazil and Australia. *Fisheries Research*, *71*, 43-59.

Smith, E. A. (1991). *Inujjuamiut foraging strategies: evolutionary ecology of an Arctic hunting economy*. Aldine de Gruyter.

Stanton, R. L. y J. D. Bell. (1969). *Volcanic and associated rocks of the New Georgia Group, British Solomon Islands Protectorate*. Her Majesty's Stationary Office.

Stoddart, D. R. (1969). Geomorphology of the Marovo Lagoon elevated barrier reefs, New Georgia. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, *255*, 388-402.

Stouffle, R. W., D. B. Halmo, T. W. Wagner y J. J. Luczkovich. (1994). Reefs from space: satellite imagery, marine ecology, and ethnography in the Dominican Republic. *Human Ecology*, *22*, 355-378.

Sussman, R. W., G. M. Green y L. K. Sussman. (1994). Satellite imagery, human ecology, anthropology, and deforestation in Madagascar. *Human Ecology*, *22*, 333-354.

Turner, J. y R. Klaus. (2005). Coral reefs of the Mascarenes, Western Indian Ocean. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, *363*, 229-250.

Turner, M. D. (2003). Methodological reflections on the use of remote sensing and geographical information systems in human ecological research. *Human Ecology*, *31*, 255-279.

Villa, F., L. Tunesi y T. Agardy. (2002). Zoning marine protected areas through spatial multiple criteria analysis: the case of the Asinara

Island National Marine Reserve of Italy. *Conservation Biology*, *16*, 515-526.

Winterhalder, B. (1981). Foraging strategies in the boreal forest: an analysis of cree hunting and gathering. En B. Winterhalder y E. A. Smith (eds.). *Hunter-gatherer foraging strategies* (6-98). University of Chicago Press.

Winterhalder, B. y E. A. Smith. (2000). Analyzing adaptive strategies: human behavioral ecology at twenty-five. *Evolutionary Anthropology*, *9*, 51-72.

WWF South Pacific Programme. (2003). *Pacific ecoregions in action: Bismarck Solomon Seas*. http://www.wwfpacific.org.fj/pacific_ecoregions_bsse_index.htm.

26. Mujeres, hombres y árboles: género, poder y propiedad en paisajes forestales y agrarios[1]

Dianne Rocheleau y David Edmunds

Resumen: Este trabajo propone una revisión del concepto de propiedad comúnmente asociado a la tierra, para analizar las dimensiones de género de la tenencia de los árboles. A diferencia de los mapas bidimensionales de la propiedad de la tierra, la tenencia de árboles se caracteriza por derechos arraigados y superpuestos que son producto de la diversidad social y ecológica, así como de las complejas conexiones entre diversos grupos de personas y recursos. Dicha complejidad implica que los enfoques para mejorar la equidad, que utilizan conceptos de propiedad basados en la tierra, pueden ser demasiado simplistas. En lugar de incorporar tanto a las mujeres como a los hombres en los marcos de propiedad existentes, argumentamos que un enfoque más apropiado sería reconocer formas jurídicas y teóricas de ver la propiedad que reflejen las realidades y aspiraciones de las mujeres y los hombres, así como la complejidad y diversidad de los paisajes rurales.

Por medio de una revisión selectiva de investigaciones, de las particularidades africanas y de estudios de caso ilustrativos basados en nuestro trabajo de campo, exploramos la naturaleza "de género" del uso y acceso a los recursos, en específico, en relación con los árboles y los bosques, y examinamos distintas estrategias para abordar las desigualdades de género en este ámbito. Una revisión de los antecedentes teóricos e históricos de la tenencia de la tierra ilustra las limitaciones de los mapas "bidimensionales" asociados a la tenencia de la tierra a la hora de delinear los límites de los paquetes de derechos arraigados y la gestión de árboles y bosques por parte de diferentes actores. La introducción de la perspectiva de género

1 Publicado originalmente en: Dianne Rocheleau y David Edmunds, 1997, "Women, men and trees: gender, power and property in forest and agrarian landscapes", *World Development*, 25(8), 1351-1371.

añade otra dimensión al análisis de los nichos multidimensionales del territorio rural, definidos por el espacio, el tiempo, los planes específicos, los productos y los usos. El género es un factor de complicación debido a las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, estas relaciones de poder están sujetas a cambios. En lugar de adoptar una dicotomía artificial entre los que "tienen" y los que "no tienen" (por lo regular vinculados a hombres y mujeres, respectivamente, en los debates sobre la tenencia de la tierra), sostenemos que los dominios de la tenencia de la tierra definidos por el género pueden ser complementarios y negociables. Si los regímenes de tenencia de recursos son negociables, pueden ser afectados por cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esta idea tiene importantes implicaciones políticas. En muchos debates sobre la tenencia, los derechos se asumen a menudo como exógenos o determinados de forma externa. La negociabilidad de los derechos de tenencia ofrece a los responsables políticos y a las comunidades otra palanca con la cual promover una distribución más equitativa de los derechos de gestión y el uso de los recursos naturales.

Palabras clave: género, propiedad, árboles, bosques, agroforestería, África.

Introducción

El concepto de tenencia se ha complicado —y enriquecido— gracias a dos corrientes convergentes de investigación y práctica en la última década. La naturaleza multidimensional de los derechos, no tan nítidamente estructurados y superpuestos, a la tierra, el agua, las plantas, los animales y sus productos, así como a su utilización, ha dado lugar a un replanteamiento de los conceptos teóricos y jurídicos de la propiedad. Al mismo tiempo, la cuestión de la equidad entre los múltiples usuarios de los recursos ha surgido como un reto importante para las agencias ambientales, de desarrollo y de gestión de recursos. La aparición histórica del feminismo y la preocupación por la desigualdad de género en el desarrollo internacional ha servido como una puerta de entrada al estudio de las relaciones sociales de poder (tanto de conflicto como de afinidad) que dan forma y a la vez son condicionados por la definición, la distribución y el control de la propiedad

(ya sea privada, pública, o "común").

La combinación de las cuestiones de género y de tenencia de los recursos ha llevado la cuestión de la tenencia más allá de los mapas bidimensionales de la tenencia de la tierra para abordar realidades multidimensionales, caracterizadas por la diversidad ecológica y social y por un entramado de conexiones complejas entre varios grupos de personas y los recursos que los sostienen. En esta revisión selectiva y marco conceptual esbozamos la naturaleza "de género" del uso, el acceso, el control y la responsabilidad de los recursos en lo que concierne a los árboles y los bosques. También examinamos estrategias concretas para abordar las desigualdades de género en este dominio. Planteamos un enfoque de usuarios múltiples para el abordaje de la propiedad en la investigación y el desarrollo agrícola y forestal, basado en el análisis de género en lugar de utilizar el análisis de género para "igualar" el marco de tenencia existente con respecto a los árboles y los bosques. Este enfoque se centra en la interacción entre las relaciones de propiedad basadas en el género y los usos, los paisajes y los ecosistemas de los grupos de usuarios, basados en el género. Estos conceptos simples de propiedad resultaron inadecuados para delinear los límites de los paquetes de derechos articulados (Riddell, 1987; Fortmann, 1985) que rigen el uso, el acceso y la gestión de los árboles por parte de diversos actores.

Antecedentes históricos y teóricos

Una breve historia

Gran parte de la bibliografía actual sobre género y tenencia de recursos tiene su origen en las iniciativas forestales y agroforestales de la década de los ochenta y su encuentro con las complejidades de las relaciones sociales, los paisajes y los regímenes de propiedad en las comunidades forestales, agrarias y pastoriles de todo el mundo. En comunidades desde la cuenca del Amazonas hasta las sabanas de Sahelia, los organismos de desarrollo forestal y agrícola se han enfrentado a la necesidad de abordar la distri-

bución de los recursos entre las comunidades y los hogares, así como la división por género de los derechos de uso, acceso, gestión y propiedad legal dentro de los hogares. En muchas partes de África, la reforma de la tenencia de la tierra se había llevado a cabo sobre todo en zonas altamente comercializadas, mientras que la mayoría de las comunidades rurales, sobre todo en las tierras áridas, seguían funcionando con una combinación de regímenes de propiedad "tradicionales"[2] y "modernos". Estos se regían oficialmente por el derecho "consuetudinario" codificado y el derecho estatutario, de manera respectiva. El derecho consuetudinario reconocido por el Estado solía ser codificado por antropólogos o administradores coloniales, a menudo en un momento determinado, y luego se mantenía como norma jurídica permanente.[3] Estos códigos solían aplicarse a combinaciones de derechos de propiedad común y privada, y solían incluir derechos articulados de uso y acceso a la tierra o a recursos específicos. A menudo, estos recursos específicos se encontraban dentro de zonas más extensas, y el control o propiedad legal recaían en un linaje, clan u otra forma de grupo familiar, a menudo extenso (Okoth-Ogendo, 1991; Pala-Okeyo, 1980; Rocheleau, 1988a; Agarwal, 1994; 1995). A medida que los investigadores revisaban el "derecho consuetudinario" codificado que regula la tenencia de la tierra, el uso y la gestión de los árboles y documentan las prácticas reales que reflejan los derechos sobre los árboles y los bosques, se encontraron con las limitaciones de los mapas bidimensionales y los constructos simples de la propiedad. Estos constructos demostraron ser inadecuados para esbozar los límites de los paquetes de derechos anida-

2 Ponemos *tradicional* entre comillas para dar a entender la naturaleza problemática de esta palabra aplicada a prácticas que no son estáticas, sino que evolucionan y se sujetan a modificaciones por la negociación entre diversos grupos de usuarios de la tierra y las instituciones del Estado. Los regímenes de propiedad a menudo denominados "tradicionales", en oposición a la ley estatutaria moderna, europea, en realidad constituyen desenlaces complejos de cambio cultural y ambiental, y a menudo incorporan elementos de la ley estatutaria moderna en los regímenes de propiedad privada y pública. Esto a menudo ocurre como una adaptación a los mercados de tierras desarrollados en el ámbito nacional o en anticipación a revisiones formales y adjudicación de tierras. Muchos de los sistemas de uso de suelo y de tenencia vigentes en África en la década de los ochenta también reflejaban la adaptación o transformación de prácticas pastoriles y agropastoriles en asentamientos sedentarios y una transición de la producción agrícola a la mano de obra asalariada.

3 Estas reglas a veces se interpretan con referencia a los ancianos oficialmente reconocidos en casos judiciales.

dos (Riddell, 1987; Fortmann, 1985) que gobiernan el uso, el acceso y el manejo de los árboles en manos de una variedad de actores.

También se aclaró de forma considerable la tenencia de los recursos al darse cuenta de que incluso dentro de los bloques en apariencia unitarios de propiedad privada utilizados por los "hogares" existían estructuras y procesos complejos que determinaban la división y el reparto de los recursos en función del género. La yuxtaposición de bloques simples y unitarios de tierra como propiedad, con los complejos sistemas de género para el uso, acceso, responsabilidad y control de los árboles, alertó a los especialistas en silvicultura y agroforestería, a los planificadores y a los responsables políticos sobre la naturaleza multidimensional de la tenencia de los recursos en general, incluso bajo regímenes de propiedad privada.

Esta nueva visión de dominios múltiples y superpuestos dio lugar a nuevas construcciones de "nichos" multidimensionales en el paisaje definidos por el espacio, el tiempo y plantas, productos y usos finales específicos. La ocupación de estos nichos se regía por derechos de propiedad legal (o codificados formalmente de otro modo), determinados o modificados por precedentes históricos de usos y acceso; identidad; relaciones sociales de poder (incluyendo tanto el conflicto como la afinidad); los patrones diarios de uso y gestión, e inversión de mano de obra a largo plazo (Rocheleau, 1988a; 1988b; Bruce, 1989; Bruce *et al*., 1993). Estos aspectos formales y las normas informales se consideraban como estructuras en una jerarquía de poder o, de manera alternativa, integradas en un marco de economía moral. Además, estas normas reflejaban categorías de recursos, de tenencia y de uso de suelo que dependían de construcciones culturalmente distintas del uso de la tierra y el paisaje (Croll y Parkin, 1992; Posey, 1985; Rocheleau y Ross, 1995; Leach, 1994; Carney y Watts, 1990; Fortmann, 1995; Moore, 1993).

El desplazamiento del análisis del género en la tenencia de la tierra desde un enfoque en los terrenos a un enfoque en los árboles y los bosques puso en tela de juicio las construcciones predominantes de las relaciones de género en los circuitos del desarrollo. Tanto los enfoques feministas liberales como los socialistas sobre las mujeres en el desarrollo postulaban una estructura de género polarizada y jerárquica en la que algunos

hombres tenían tierras y la mayoría de las mujeres no (Davison, 1988). A medida que el debate sobre la tenencia en función del género se trasladó a los árboles, los bosques, los cultivos y los animales, los conceptos tuvieron que reformularse para dar cabida a la complementariedad de los ámbitos de género en el acceso, el uso, el control y la propiedad formal (un medio de control) de los recursos. Las ecologistas culturales feministas y los profesionales de campo señalaron la complementariedad de la división de género en el trabajo, el conocimiento (Jiggings, 1988), los lugares (Rocheleau, 1988a; Fortmann y Nabane, 1992) y las organizaciones sociales de género (Thomas-Slayter y Rocheleau, 1995a; Thomas-Slayter y Rocheleau, 1995b). Dada la tenacidad de las ideologías de género y las relaciones de poder (Moore, 1988; Jackson, 1993) sugerimos un constructo de complementariedad flexible bajo relaciones de poder desigual, en la que los hombres podrían ejercer su poder para definir una nueva complementariedad más ventajosa para ellos.

Si bien es cierto que los conocimientos de los usuarios permitieron una evaluación más realista de la situación, también complicaron la comprensión y aplicación de los conceptos de tenencia de los recursos en el desarrollo, la búsqueda y la política forestal y agrícola. El resultado lógico de un proyecto de este tipo es nada menos que la reinvención de las relaciones formales y de procedimiento entre el cambio tecnológico, la tenencia y las organizaciones sociales.

Instrumentos teóricos y relevancia política

La teoría posestructuralista feminista ha reconocido cada vez más la complejidad (Mohanty, 1991), sustituyendo las dicotomías fáciles por visiones de múltiples polos de identidad y cambiantes campos de fuerza de poder que rigen tanto el conflicto como la afinidad entre los grupos de personas (Haraway, 1991; Harding, 1991; Watts, 1993; Rocheleau, 1995; Rocheleau *et al*., 1996). La composición y el alineamiento de los grupos de afinidad basados en intereses compartidos pueden cambiar de manera sustancial en función de la cuestión de que se trate, al igual que las pautas

reales de definición, uso, acceso, gestión y control de los recursos en la silvicultura y la agricultura local. Ejemplos recientes del movimiento de los recolectores de caucho de la Amazonia brasileña (Campbell, 1996), de la Selva Lacandona de México (Arizpe *et al*., 1993), un proyecto de silvicultura social de la República Dominicana (Rocheleau y Ross, 1995) y el programa de gestión forestal conjunta en India (Sarin, 1996) demuestran alianzas cambiantes dentro de los movimientos sociales basadas en el género, la etnia y la riqueza.

El encuentro con la complejidad y la aceptación de la multidimensionalidad crean un modelo mucho más rico y también mucho más difícil para el cambio tecnológico. Dejando a un lado las sutilezas teóricas, no es fácil diseñar, y mucho menos ejecutar, un proyecto forestal, agroforestal o agrícola que aborde objetivos económicos, ambientales y de equidad dentro de una maraña tan compleja (¡y cambiante!) de relaciones de tenencia. Algunos especialistas en desarrollo se han resistido enérgicamente a la inclusión de las cuestiones de género, alegando la introducción de una "complejidad desmesurada" en lo que parecía un modelo "gestionable" de cambio tecnológico y de uso de la tierra.

En el ámbito de los programas de transferencia de tecnología, la reinvención del modelo de propiedad como una constelación cambiante de intereses en un dominio multidimensional de tenencia de recursos parecería requerir, como mínimo, un esfuerzo heroico de mercadeo. En los movimientos sociales populares, tampoco es probable que la retórica académica del posestructuralismo feminista galvanice el apoyo o genere entusiasmo, e incluso cuando se aclara puede verse como una amenaza para la cohesión del movimiento. Sin embargo, la fluidez de objetivos e identidades descrita por esta escuela teórica refleja tanto la práctica diaria como el desarrollo a largo plazo de los movimientos sociales implicados en cuestiones de género. Empero, la fluidez de propósito e identidad que describe esta escuela teórica sí logra capturar tanto la práctica cotidiana como el desarrollo a largo plazo de movimientos sociales involucrados en luchas por la tenencia. También refleja la situación de mujeres individuales con identidades complejas y afinidades múltiples involucradas tanto en las luchas personales diarias como en los esfuerzos colectivos para mejorar

la seguridad de su tenencia de árboles, bosques y otros recursos en el paisaje rural. Existen muchos buenos motivos para explorar más a fondo esta dirección teórica y razones igual de convincentes para rearticular en términos sencillos y aclarar las implicaciones prácticas y políticas mediante mapas, esbozos y cuentos, así como de cifras.

Las secciones que siguen trazan la progresión del género en la tenencia de recursos desde la tierra como propiedad privada hasta los dominios por género y los terrenos cambiantes que vinculan la práctica cotidiana de la agricultura, la silvicultura y el pastoreo con las construcciones sociales del yo, la sociedad, la naturaleza, los recursos, los derechos y los privilegios. El documento también recorre el espectro que va desde los argumentos instrumentalistas a favor de la igualdad de género en la tenencia, basados en la eficiencia económica y la conservación de los recursos, hasta los argumentos con un enfoque más social y político, formulados en el contexto de una economía moral. En este último caso, la dimensión de la tenencia en la agricultura, la silvicultura y la conservación se trata como un instrumento de capacitación de mujeres y hombres (Agarwal, 1994), en lugar de lo contrario. El documento explora la historia y los debates en torno a la tenencia de los recursos desde una perspectiva de género, haciendo hincapié, aunque no de forma exclusiva, en África Oriental, donde hemos observado y debatido la dramática y visible yuxtaposición de distintos regímenes de tenencia con una gran diversidad de personas en las comunidades rurales.

El género en la tenencia de los árboles y los bosques en África

En esta sección, examinamos tres enfoques diferentes de la complejidad y el dinamismo del género en los regímenes de tenencia de recursos: (i) diferencias en los derechos de los hombres y las mujeres a poseer tierras con un título formal; (ii) diferencias en los espacios y lugares en los que hombres y mujeres utilizan recursos arbóreos y forestales y en los cuales ejercen algún control sobre el manejo, y (iii) las diferencias entre el acceso de los hombres y las mujeres a árboles, bosques y sus productos mediante diversas dimensiones anidadas (i.e. espacio dividido según el género, acceso

determinado por el género a recursos dentro de un espacio determinado, acceso determinado por el género a los productos de determinado recurso, y acceso por temporada o alguna otra medida de tiempo determinado por el género). Para cada uno de estos acercamientos conceptuales, discutimos una serie de asuntos con relevancia tanto teórica como práctica en el estudio de los regímenes de tenencia, que abarcan desde la escala de análisis apropiada hasta la eficacia práctica de la tenencia *de facto* según la costumbre. A continuación, elaboramos una tipología de posibilidades de acceso a los árboles y el bosque, acompañada de material de estudios de caso de comunidades específicas en Kenia. Finalizamos con una discusión sobre la importancia de las relaciones sociales para la cuestión del acceso a los recursos y la necesidad de enfocarnos en los procesos de toma de decisiones y las organizaciones sociales, además de las reglas fijas y formales de la estructura de tenencia para asegurar el acceso y control sobre los recursos naturales tanto para las mujeres como para los hombres.

Lo que surge de nuestra revisión de otras investigaciones de alrededor del continente y nuestras propias experiencias en África del Este es la imagen de regímenes de tenencia de recursos altamente complejos, a menudo negociables. Los derechos de las mujeres son sustanciales, aunque a menudo sean tenues y estén bajo presión por una variedad de cambios en el uso de suelo, la composición familiar y la estructura familiar. En algunos casos, las prácticas de usos y costumbres en constante evolución han contribuido a conservar el acceso de las mujeres a los recursos y merecen esfuerzos para proteger, enriquecer o reconfigurar dicha ley de usos y costumbres en forma de leyes estatutarias y procedimientos administrativos más robustos y equitativos. En otras tantas situaciones, las mujeres han podido establecer riqueza independiente en la tierra y los árboles basada en la adquisición de tierras privadas mediante el comercio y la venta de cultivos lucrativos como el cacao (Berry, 1989; 1993; Lastarria-Cornhiel, 1995). En respuesta a esta complejidad, recomendamos un acercamiento flexible, basado en los usuarios, a las intervenciones de manejo de recursos basadas en la participación activa de todos los usuarios de recursos en todas las fases del desarrollo del programa, incluyendo la investigación y la planeación, así como la realización de iniciativas específicas. Argumentamos que la flexibilidad se logra mejor, a su vez, cuando: se destacan múltiples usos

de la tierra, el agua, las plantas y los animales; se favorecen usos renovables de los recursos en vez de consumistas, y los derechos de uso y acceso están codificados tan cuidadosamente y están tan bien implantados como los derechos de tenencia y disposición.

Esta reorientación en enfoque programático también debe acompañarse de cambios en los marcos legales y administrativos que apoyan los derechos de acceso de las mujeres. En específico, agentes externos podrían alentar el desarrollo de: (i) derechos legales y procedimientos administrativos que se adapten a múltiples usos y múltiples usuarios, incluyendo los derechos de las mujeres al uso y acceso en propiedad privada masculina, propiedad comunitaria, propiedad controlada por oficiales públicos; (ii) reconocimiento formal a la recolección como un uso válido de la tierra, en particular en zonas fronterizas de los parques nacionales; (iii) el involucramiento complementario de hombres y mujeres en el procesamiento y comercio de productos particulares de sistemas de uso de suelo particulares o de sistemas de uso de suelo que incluyan una combinación de productos, procesamiento y actividades comerciales separadas, donde algunas ya son controladas por mujeres; (iv) reconocimiento legal de la ley de usos y costumbres, revisada para restaurar un equilibrio entre los derechos y responsabilidades de los hombres y las mujeres; o (v) reformas procesuales que permitan que organizaciones de mujeres y otras organizaciones con una fuerte representación de mujeres, participen en la formulación e implantación de códigos y contratos de proyectos que protejan los derechos y responsabilidades de los hombres y las mujeres en prácticas de uso de suelo establecidas, experimentales o en evolución. Volveremos a estas recomendaciones a medida que describamos los regímenes de tenencia específicos.

Tenencia de la tierra y título de propiedad formal

En la mayor parte de África, es mucho menos probable que las mujeres cuenten con un título de propiedad formal respecto a los hombres (Lastarria-Cornhiel, 1995). Se ha argumentado que la incapacidad de las mujeres para obtener títulos de propiedad formales las pone en una posición de extrema dependencia respecto a los hombres en cuanto al acceso a los recursos de los árboles y los

bosques. Es posible que las mujeres tengan poco control sobre qué cultivos se siembran, dónde se talan o se siembran los árboles, o cómo se manejan los barbechos, sin su propio título de propiedad.

Para las obras que se limitan solo a un análisis de la tenencia formal, la subordinación de las mujeres en cuanto al acceso a los recursos de los árboles y los bosques parece estar sujeta a su exclusión de los regímenes de tenencia formal. El énfasis se pone en "incorporar mujeres" a estos regímenes formales tal como están constituidos y evolucionan en la actualidad. En la mayoría de los países africanos, esto significa alentar a las mujeres a buscar la tenencia individual y derechos exclusivos de uso y manejo (Zwart, 1990). Se tendrían que hacer cambios en la legislación nacional para alentar la titularidad de la tierra para las mujeres, ya sea como parte de un título conjunto de esposos si están casados, o como individuo si la mujer es viuda o soltera.

El enfoque en la titularidad de la tierra a menudo minimiza la importancia de los derechos de uso y tenencia de los recursos para las mujeres que ya existen y están codificados en la ley de usos y costumbres de muchas sociedades. Por ejemplo, entre pueblos *swahili* sobre la costa de Kenia, las mujeres musulmanas pueden ser dueñas de los árboles de nuez de la India en tierras que son propiedad de sus parientes varones. Sus derechos se extienden al grado de constituir restricciones en el uso de suelo que sean incompatibles con la producción de nuez de la India (Fortmann, 1985). Sin embargo, tales sistemas se construyen sobre la suposición de una ocupación continua por parte de múltiples usuarios insertados en grupos familiares; no integran prácticas territoriales de mercado que tratan a la tierra como una mercancía canjeable e intercambiable. Las mujeres que disfrutan del acceso a una variedad de recursos de los árboles, los bosques y los pastizales a lo largo del paisaje rural podrían ver limitado su acceso después de que las reformas de titularidad o de tenencia de la tierra hayan investido de mayor poder de exclusión a los terratenientes, ya sean hombres o mujeres. Aun cuando el título formal se otorga en conjunto a un varón y su esposa, la mujer podría perder autoridad de toma de decisiones sobre sus antiguos dominios y fuera de la granja a medida que las "cabezas" del hogar adopten la responsabilidad plena y exclusiva del manejo de la tierra del hogar, y de todas las plantas y animales en él.

En los casos donde la privatización de la tierra ya está establecida o bien encaminada, es importante asegurar que las mujeres tengan derechos de tenencia de la tierra como un paso necesario, si bien insuficiente, para mejorar su acceso a los árboles y otros recursos naturales (Agarwal, 1994; 1995). Tomadores de decisiones, personal de extensión y diseñadores y gerentes de proyectos que trabajen en estos casos deberían estar alerta a las oportunidades para alentar cambios apropiados tanto en la ley nacional estatutaria como en distintas versiones de la ley de usos y costumbres. La legislación nacional de Uganda, sostenida por comunidades locales, ha defendido los derechos de las viudas frente a los reclamos de herencia de la tierra de sus hijos en muchas comunidades. En una iniciativa más situada localmente, los padres de una comunidad en el distrito Machakos, Kenia, han empezado a designar tierras a hijas solteras que han tenido hijos, en rompimiento con la práctica local de antaño (Rocheleau *et al*., 1994a). Este cambio ha sido autorizado, e incluso alentado, por ancianos locales en un esfuerzo para dar un lugar en el mundo a las mujeres e hijos que habían adquirido el estatus de "sin hogar" e "ilegítimas" en términos de su propia cultura.[4] Agentes de desarrollo externos podían alentar estos cambios en situaciones así al reconocer y dar validez a la tenencia de la tierra en manos de madres solteras o viudas, incluyendo sus hogares como un grupo usuario particular para la asistencia técnica forestal y agroforestal.[5]

Lugares y espacios de género

Otro enfoque para comprender la naturaleza de género de los regímenes de tenencia de árboles y bosques es centrarse en la actividad y la autoridad en el espacio entre hombres y mujeres. En otras palabras, se deben hacer esfuerzos para descubrir, reorganizar y reforzar aquellos espacios en el

4 Si bien esto representa un verdadero avance para muchas jóvenes y sus hijos, aún no resuelve la situación de las mujeres divorciadas, abandonadas o casadas que sufren abuso, quienes se considera tienen un lugar (si bien uno problemático) en la unidad habitacional de la familia de su esposo.

5 Tales medidas, sin embargo, no serían suficientes para asegurar un control total sobre la tierra u otros recursos conferidos por cualquier determinado proyecto, ya que la titularidad puede no ser suficiente para que las mujeres ejerzan control (véase Agarwal, 1994; Wangari, 1991; Antwi-Nsiah, 1991), en particular para las mujeres solteras jóvenes que siguen siendo dependientes de sus padres de otras formas.

paisaje rural en el que las mujeres ejercen un mayor control relativamente sobre las decisiones de manejo de recursos y de las cuales tienen más probabilidades de derivar beneficios personales. Carney (1988) ha demostrado, por ejemplo, que las mujeres de Gambia a menudo tienen campos de arroz separados dentro de tierras "familiares" que ellas pueden administrar, en gran medida, de manera independiente de sus esposos y otros familiares masculinos para su beneficio personal. Aunque carecen de una tenencia formal legal, sus derechos por usos y costumbres a esta tierra son sujeto de tenencia, y deben ser abordados en cualquier intento por cambiar los patrones de uso de suelo (Carney, 1992). De manera similar, Leach (1992) ha discutido sobre el desarrollo del control de las mujeres sobre el cultivo de arroz en humedales en Sierra Leona. En este caso, las mujeres han aprovechado una parte del paisaje considerada por los hombres como indeseable para establecer huertos para los alimentos que suplementan el arroz en la dieta y que sobreviven a las condiciones de sequía cuando otros cultivos perecen.

Los espacios de mujeres no siempre son fáciles de identificar en el paisaje como pueden serlo los campos de cultivo bien delimitados. A menudo se encuentran en los espacios "intermedios", no muy codiciados por los hombres, pero todavía bastante útiles para las mujeres (Fortmann y Bruce, 1988; Rocheleau, 1988b; Leach, 1992). Dichos espacios podrían incluir el matorral que crece a lo largo de los caminos y bardas; los pequeños huertos junto a la casa; los intersticios arriba, abajo y entre los árboles, y cultivos de los hombres, o la tierra "degradada" que se encuentra en las pendientes inclinadas y boscosas o en zanjas de erosión llenas de vegetación. Recursos como leña, plantas medicinales, alimentos silvestres y pastos para tejer o techar se encuentran en estos espacios y a menudo son críticos para los esfuerzos de las mujeres por cumplir con sus responsabilidades personales, del hogar y de la comunidad (Rocheleau, 1991).

En algunas zonas del continente, el "monte" también puede ser un lugar donde las mujeres disfrutan de derechos sustanciales al uso y manejo de recursos. Hasta hace poco, cuando la presión demográfica y la privatización empezaron a afectar incluso los paisajes más remotos de África, muchas de estas áreas fueron tratadas como comunales de alguna forma u otra.

Como en el caso de los espacios "intermedios" mencionados arriba, las mujeres no tenían derechos exclusivos en estos matorrales. Sin embargo, sí gozaban de derechos de uso bien establecidos y quizá incluso derechos de manejo y disposición *de facto* a muchos de los recursos ahí presentes (Davison, 1988; Edmunds, 1997).

En contraste con algunas obras sobre los regímenes de tenencia formal, el análisis de los espacios y lugares según el género pone atención en los derechos *de facto* basados en las normas de usos y costumbres y las prácticas cotidianas. Se buscan intervenciones en el ámbito de la comunidad y del hogar que establezcan nuevos recursos en lugares ya controlados por las mujeres, como cuando se siembran especies de árboles exóticas para leña en las zanjas o se introducen nuevas verduras a los huertos del hogar. También se pueden hacer esfuerzos para crear espacios totalmente nuevos sobre los cuales las mujeres tengan alguna autoridad. Esto a veces se logra mediante la formación de grupos de mujeres, que en ciertas circunstancias pueden obtener acceso a recursos públicos o disputados y mantener una medida de control sobre ellos con mayor facilidad que mujeres individuales (Zwart, 1990; Chimedza, 1988; Rocheleau, 1991; Schroeder, 1993; Rocheleau *et al*., 1994b; Asamba y Thomas-Slayter, 1995; Agarwal, 1994). El involucramiento de dichas organizaciones de mujeres en la planeación y la administración de intervenciones de proyectos puede ayudar a asegurar que los recursos desarrollados por medio de las actividades del proyecto estarán disponibles para las mujeres.

La atención puesta en la práctica de los usos y costumbres también conduce al análisis de las diferencias en cómo los hombres y las mujeres se benefician de los productos del uso de los recursos. En muchos casos, aunque las mujeres tengan responsabilidades sustanciales de trabajo y de manejo para un recurso en particular, los varones controlan la disposición o comercialización de los productos de ese recurso, así como la distribución de los beneficios en el hogar (Tibaijuka, 1984; Chimedza, 1988). Este suele ser el caso cuando las mujeres aportan una carga sustancial de trabajo para la producción de cultivos lucrativos arbóreos como el café, el cacao, los cítricos y otras frutas, forraje, leña comercial o madera en campos "del hogar" o "de la comunidad". Las mujeres podrán realizar mucha de

la siembra, del desbroce y de la cosecha, pero entregan el producto para la venta a sus esposos u otros familiares hombres, como es el caso con el arroz en Gambia (Carney, 1992). También puede ser el caso cuando las mujeres se involucran en proyectos de reforestación "comunitarios", cuando las mujeres cuidan los viveros y trasplantan las plántulas, pero los hombres hacen uso de los árboles para postes (Rocheleau, 1991). Las intervenciones en proyectos y políticas públicas pueden hacer referencia explícita a quiénes disponen de los productos de los árboles y ayudar a las mujeres a evitar situaciones en las que su trabajo es explotado en gran medida para el beneficio de otros. Agentes externos también podrían alentar el desarrollo de nuevos ámbitos de complementariedad para hombres y mujeres en el procesamiento y la comercialización de productos arbóreos específicos de sistemas de uso de suelo particulares para mejorar el acceso de las mujeres a los beneficios del producto.

Al centrar el enfoque en la escala comunitaria y del hogar, el acercamiento al espacio según el género ilumina más las diferencias entre las mujeres en intereses, derechos y responsabilidades. La edad y, en los hogares polígamos, el orden del matrimonio son factores importantes en la determinación de los derechos y las responsabilidades de las mujeres bajo la ley consuetudinaria de tenencia de recursos. Entre los luhya en Kakamega, Kenia, las viudas con más edad tienen significativamente más poder de decisión sobre la siembra, el cuidado y la disposición de árboles de lote o de barda respecto a las viudas de menor edad (Bradley, 1991). La riqueza también es un factor significativo (Chimedza, 1988). Las mujeres pobres en particular tienen una fuerte dependencia en los productos arbóreos de los lugares "intermedios" del paisaje, como se documenta en el distrito Machakos, Kenia, lo cual pesa a favor del reconocimiento de estos espacios intermedios en el diseño de la tecnología, la planeación y las políticas de uso de suelo (Rocheleau, 1991). En cada caso, las diferencias entre las mujeres en el acceso al espacio tienen implicaciones en su participación en los proyectos de reforestación, en la probabilidad de éxito del proyecto y en el impacto de las intervenciones forestales en sus vidas.

Por último, las investigaciones sobre el espacio según el género nos han ayudado a entender mejor las políticas de recursos por género en el

ámbito subnacional, en comunidades específicas (Carney, 1988; Leach, 1994; Fortmann, 1995; Rocheleau, 1991). Schroeder, en su trabajo en La Gambia, muestra cómo las mujeres han resistido, tanto por medio de procesos legales formales, como mediante sutiles actos de sabotaje, los intentos por parte de los terratenientes varones de convertir los huertos de verduras lucrativos en huertos de árboles frutales o en parcelas de árboles (1993). Los terratenientes manipularon la ley de usos y costumbres para obligar a las mujeres a sembrar árboles en los campos que rentaban para sus huertos, que a la postre dejaron en la sombra a los cultivos de las mujeres y los desplazaron de los huertos que habían cercado, regado y fertilizado con un financiamiento para proyectos de mujeres y su propio trabajo. Las mujeres de la región del bosque Kibale, en Uganda, han documentado la resistencia de las mujeres a la conversión de pendientes "degradadas" en plantaciones supuestamente comunitarias de bosque, que en gran medida quedan a disposición de los hombres, que han efectuado arrancando y pisoteando plántulas (Edmunds, 1991).

Estas luchas políticas sobre los espacios según el género se llevan a cabo más a menudo bajo el ímpetu y la autoridad de la "economía moral" local (Scott, 1976), y no bajo el sistema legal formal (Moore, 1993; Edmunds, 1991; 1997). Sus resultados dependen mucho de las relaciones sociales personales y la interpretación creativa de historias, valores y ambiciones locales (Fortmann, 1995; Moore 1993).

Si bien los análisis del espacio según el género son un bienvenido complemento a los estudios de la falta del acceso a la tenencia formal de la tierra de las mujeres, sugerimos que es necesario elaborar más allá. La tendencia en cambios en el uso de suelo alrededor de muchas partes de África parece indicar una pérdida constante de "monte", así como de muchos de los espacios "intermedios" más grandes a los que las mujeres tienen derechos de acceso sustanciales hasta la fecha (Croll y Parkin, 1992). Los planificadores de proyectos y los responsables políticos podrían frenar esta tendencia priorizando los usos no consumistas de los recursos que se encuentran en estos lugares, en la mayoría de los casos para beneficio de las mujeres. El reconocimiento y la valoración realista de las aportaciones de las actividades de recolección de las mujeres a las economías

locales también podría complicar aún más que se justifique el desbroce de zonas de monte en las que en la actualidad dependen las mujeres. Estos esfuerzos por detener el desarrollo de tierras de monte, sin embargo, no serán suficientes por sí mismos para asegurar un acceso adecuado de las mujeres a los recursos de los árboles y los bosques que necesitan.

Las agencias de desarrollo y defensoría también pueden reforzar y expandir los derechos de las mujeres como usuarias de recursos localizados en el interior de los espacios privados y comunitarios que presumiblemente pertenecen a los hombres (Rocheleau, 1988a; 1991; Fortmann y Bruce, 1988; Bruce *et al*., 1993; Schroeder, 1993). A medida que estos paisajes "masculinos" cambian, de forma constante crean nuevos espacios "intermedios", si bien más pequeños —parches de tierra sin cultivar; delgadas franjas de vegetación entre campos; sotobosques en huertos de café o cacao—, así como nuevas categorías de recursos por tipo o por valor. Claramente, son necesarios esfuerzos más amplios para mejorar el acceso de las mujeres a parcelas separadas de campo, bosque, árboles y huertos. Empero, la capacidad de las mujeres para afirmar y quizá formalizar sus derechos a los recursos incluso dentro de estos espacios más pequeños y constreñidos de "microfrontera" será de vital importancia para ellas mientras intentan cumplir con sus responsabilidades cotidianas.

Acceso por género a los recursos aglomerados

Reconocer los espacios segregados de mujeres y hombres no necesariamente nos dice quién cuenta con qué nivel de acceso a cuáles recursos, ya que tanto hombres como mujeres a menudo gozan del uso de plantas y animales específicos dentro de espacios públicos o en propiedad privada ajena. Los derechos de las mujeres dependen por lo general de una relación con el individuo o grupo que ejerce los derechos de "propiedad" de disposición y exclusión, así como el control práctico. No obstante, existen fuertes presiones sociales para adherirse a normas de conducta que apoyan el acceso de las mujeres. Donde por usos y costumbres la ley sigue siendo mayormente respetada, las mujeres a menudo pueden apelar a las autori-

dades para ejercer sus derechos de acceso a las tierras de árboles, bosques o matorrales y a sus productos cuando son cuestionadas por sus esposos u otros familiares masculinos (Talle, 1988; Rocheleau, 1991; Asamba y Thomas-Slayter, 1995; McLain, 1992; Edmunds, 1997).

Estos derechos se pueden entender mejor en relación con el "monte" o los bienes comunales. Talle, por ejemplo, ha descrito los derechos de las mujeres masai de pastorear cabras y borregos en los matorrales alrededor de sus hogares, aunque los árboles y pastos de forraje se encuentran en propiedad comunal manejada y controlada por hombres (1988). Otros han discutido sobre los derechos de las mujeres para recolectar productos forestales no maderables en bosques comunitarios (Hoskins, 1982; Rocheleau, 1991; Fortmann y Bruce, 1988). Sin embargo, las mujeres ejercen esos derechos en las tierras más claramente privadas y cultivadas también (Bruce *et al*., 1993; Chavangi, 1984; Pala-Okeyo, 1980). En definitiva, es común que las mujeres reclamen el derecho a recolectar una variedad de plantas medicinales, alimentos silvestres y otros productos en tierras controladas por sus esposos (Rocheleau, 1991; Leach, 1992).

Los derechos de recolección de las mujeres también pueden ser reconocidos fuera de la familia, sobre la base de normas locales de "vecindad" y reciprocidad, pertenencia conjunta a asociaciones formales e informales, o una serie de relaciones definidas localmente (Edmunds, 1997). McLain (1992) describe un caso en Mali donde las mujeres, como prestatarias de la tierra, no tienen derecho a reclamar los árboles como su propiedad, pero sí pueden negociar beneficios sustanciales derivados de los árboles ubicados en sus parcelas "prestadas". En la región del bosque Kibale de Uganda, las mujeres pueden negociar el acceso al humedal de un vecino (masculino) con base al respeto y la asistencia otorgada a las viudas ancianas y en su buena posición en la comunidad (Edmunds, 1997). En otros casos, los espacios de las mujeres claramente contienen recursos disponibles para los hombres. En muchas comunidades, los hombres reclaman derechos de propiedad a especies de árboles maderables y cultivos lucrativos estén o no ubicados en caminos y huertos de las mujeres (Fortmann, 1984; Rocheleau, 1988a; Schroeder, 1993). Esto sugiere que la función del árbol, vinculada a las formas preponderantes de la división del trabajo y la

autoridad, influye de manera sustancial en la interpretación y aplicación de los derechos de propiedad de los árboles por género.

A menudo debemos desarticular aún más a fondo los derechos de acceso a plantas y animales específicos para ver qué productos —madera, leña, frutas, forraje— son controlados por las mujeres y cuáles por los hombres. En muchas partes de África, las mujeres tienen derechos bien establecidos para recolectar tanto frutas como madera seca de los árboles de los hombres (McLain, 1992; Bruce *et al*., 1993; Rocheleau 1988a,). Las hojas tomadas de árboles de los hombres también están disponibles para las mujeres en algunas comunidades para usos de recolección, abono, composta, o usos medicinales (Rocheleau, 1991). Estos pedacitos de paisaje, a pesar de encontrarse en recursos "de los hombres", son otro punto de intervención para los programas diseñados para mejorar el acceso de las mujeres a los recursos. Por ejemplo, la elección de especie de árbol frutal en Kabarole, Uganda, podría implicar mayores o menores ventajas para las mujeres; aunque los hombres controlan tanto los árboles de aguacate como los de cítricos, el pobre mercado para aguacates significa que las mujeres gozan de un acceso más libre a la fruta para uso en la dieta familiar o en intercambios de regalos locales. Agentes de desarrollo externos pueden apoyar el acceso de las mujeres a estos productos ayudando a diseñar intervenciones que se enfoquen en los productos sobre los cuales las mujeres tienen alguna medida de control, en especial en los paisajes agrícolas. En las zonas más "arbustivas", también podrían emplear una estrategia de apoyo a los derechos de recolección de las mujeres como un uso legítimo de la tierra dentro de los dos regímenes de tenencia, tanto consuetudinario como formales.

La variabilidad en el acceso a lo largo del tiempo también es un factor crítico en muchos regímenes de tenencia de recursos. A menudo es relativamente predecible, como cuando las mujeres hacen uso de las tierras de cultivo "de los hombres" durante la temporada seca para pastorear el ganado, o cuando usan los campos de barbecho para cosechar alimentos silvestres (Rocheleau, 1991; Leach, 1992). Si volvemos a desarticular los derechos del acceso, podemos ver que la variación estacional podría ser un factor en la forma que toma el acceso a los recursos y productos

específicos. Los árboles y matorrales de forraje, por ejemplo, que son controlados por los hombres durante la temporada seca, podrían estar disponibles para alimentar el ganado de las mujeres durante los meses más húmedos.

Los cambios temporales en el acceso no están limitados a variaciones estacionales o de otros tipos relativamente predecibles; también aplican a eventos periódicos. Por ejemplo, en el distrito Machakos, Kenia, en 1985, los hombres y las mujeres renegociaron los términos de acceso a la tierra, agua, árboles y comida durante las sequías y hambrunas (Rocheleau, 1991). Durante esta sequía, severa en particular, las mujeres pobres de muchas comunidades semiáridas tenían permitido recolectar forraje y leña de los lotes privados de los residentes más adinerados que podían utilizar para sustentarse a sí mismas, al ganado que les quedaba, o para vender por dinero para comprar comida. Behnke y Scoones (1992) abordan una flexibilidad similar entre grupos pastoriles de Botswana con recursos de pastizal, mientras que Peters ha reportado variabilidad en el acceso a recursos del agua basados en condiciones de sequía locales cambiantes (Peters, 1986; 1994). Las investigaciones que reducen la flexibilidad de estos regímenes de tenencia, por ejemplo, al desarrollar límites cuantitativos rígidos a la cosecha de productos del bosque o al ubicar la autoridad de toma de decisión fuera del área afectada por la sequía, podrían traer el desastre a la tierra y a los pobres en recursos, y deberían ser evitadas.

Otra dimensión importante que se debe considerar al evaluar el acceso de los hombres y las mujeres a los árboles y los bosques son las identidades de los diversos usuarios y sus relaciones entre sí. Desde luego, el género por sí mismo es una parte integral de la identidad propia y hemos demostrado cómo da forma al acceso a los recursos de formas significativas. La pertenencia a un determinado grupo de parentesco o familia también podría ser un criterio importante e inmediatamente evidente para obtener acceso a recursos en tierras controladas por ese grupo (Bruce *et al*., 1993; Croll y Parkin, 1992). Otro aspecto todavía de la identidad de un usuario podría no ser evidente de manera inmediata. Se ha demostrado que la pertenencia a una red de intercambio de trabajo organizada de manera informal afecta el acceso de las mujeres a recursos en muchas localidades alrededor de África (Rocheleau,

1991; Asamba y Thomas-Slayter, 1995; Zwart, 1990; Thomas-Slayter y Rocheleau, 1995b). También hay evidencia de que sobrevive el ofrecimiento de regalos y otros medios para fortalecer las relaciones personales en muchas zonas (Leach, 1992). Los akamba han revivido (y transformado) los grupos *mwethya*, una forma tradicional de intercambio de trabajo, en el distrito Machakos, Kenia, como una forma de mejorar el acceso de las mujeres a los recursos (Rocheleau, 1991; Asamba y Thomas-Slayter, 1995). El desarrollo de relaciones patrón-cliente entre las mujeres de familias ricas en recursos y pobres también se ha reportado en relación con grupos *mwethya* en algunas comunidades donde la diferenciación social se está agudizando bajo la intensificación del uso de suelo (Rocheleau *et al*., 1994a; Thomas-Slayter y Rocheleau, 1995b). En otras situaciones, las mujeres parecen trabajar mediante asociaciones más "modernas", como clubes de siembra de árboles o iglesias, para intentar fortalecer sus reclamaciones (Rocheleau *et al*., 1994b).

Con el aumento en la intrusión de la legislación del Estado a la práctica y ley por usos y costumbres, también podríamos ver a las mujeres pasando más y más tiempo intentando dar forma a esa relación de manera más efectiva (Rocheleau *et al*., 1994a). Grupos de mujeres en la localidad Mbiuni, en el distrito Machakos, ya han intentado reconfigurar las obligaciones de trabajo respecto al manejo comunitario de recursos. En particular, se han negado a trabajar solas en proyectos de desarrollo de infraestructura, forestería, agua y conservación del suelo, organizados por los jefes locales en beneficio de toda la comunidad. En cambio, han exigido que los hombres y los jóvenes también contribuyan con su trabajo, y así liberar más tiempo para que las mujeres realicen sus propias actividades grupales e individuales (Rocheleau *et al*., 1994a), incluyendo esfuerzos continuos para restablecer árboles maderables y frutales en jardines, bardas y parcelas de bosque.

Si bien esta no es una lista exhaustiva de las dimensiones por medio de las cuales podemos entender cómo el acceso a los árboles y los bosques se determina por género, debería ser suficiente para señalar la necesidad de ver más allá de la falta de tenencia formal de la tierra para las mujeres y para realizar un análisis estricto del espacio según el género. Existe una red compleja de derechos de acceso en la mayoría de las comunidades africanas rurales que exige intervenciones políticas y proyectos cuidadosamente

confeccionados. En la actualidad, las intervenciones en el manejo forestal comunitario, en las granjas forestales y la agroforestería, a menudo invierten todos los derechos de acceso en un "dueño" único, en parte en aras de la eficiencia y la simplicidad burocrática, en parte basándose en la suposición de que dichos "dueños" necesitan derechos exclusivos para administrar su tierra de manera eficiente. Desafortunadamente, dado que los derechos de las mujeres a los recursos no incluyen por lo regular los derechos primarios de disposición y control, las intervenciones que invisten de derechos de propiedad exclusiva a un solo individuo socavan el derecho por usos y costumbres de las mujeres al acceso a los árboles, productos arbóreos y otras formas de vegetación. Los proyectos y programas forestales pueden proteger mejor los derechos de acceso de las mujeres al permitir múltiples usos de espacios y recursos específicos por parte de múltiples usuarios, y al priorizar usos no comerciales, como la recolección de frutas o la recolección de madera caída, los restos de podas, o el forraje de hojas, que no excluye otros usos.

Otro aprendizaje que surge de este tipo de análisis es el papel de la negociación y el trueque en la mayoría de los regímenes de tenencia de recursos por usos y costumbres. Con un patrón de acceso tan complejo, tan dependiente de las identidades de los usuarios y tan sensible a condiciones ecológicas, económicas y sociales cambiantes, las reglas estrictas son difíciles de aplicar en la práctica cotidiana. Incluso las reglas más establecidas y claramente codificadas son reinterpretadas, renegociadas, reconstituidas o rechazadas de forma constante. Esto es cierto en particular en los lugares donde el sustento está atravesando cambios veloces, como en las regiones de alta migración masculina (Palmer, 1985), de grandes proyectos ambientales y de desarrollo (Barrow, 1992; Edmunds, 1997), de esquemas de reubicación del estado (Talle, 1988; Rocheleau *et al*., 1994b; Chimedza, 1988), o de la integración significativa y reciente al mercado (Jackson, 1985; Carney, 1988; Thomas-Slayter, 1992). La naturaleza dinámica de sus contextos políticos, económicos y ecológicos provocan alianzas cambiantes entre grupos de afinidad, como en el caso de las mujeres en Uganda del oeste que apoyaron la siembra de árboles maderables para los hombres en sus tierras de recolección de leña, para

proteger a toda la comunidad de ser desahuciada por extranjeros (Edmunds, 1997). Subordinan sus intereses como mujeres a la conservación de los derechos del grupo más amplio a la tierra contra otras comunidades o intereses externos. Esta elección representó un cambio condicional y contingente, y no categórico, en las prioridades de las mujeres a favor de la solidaridad de grupo.

A pesar del valor de la ley codificada de usos y costumbres que reconoce los derechos anidados de las mujeres a los árboles, bosques y sus productos, debemos tener algo de precaución. El peligro de una aplicación demasiado literal de la tenencia de los bosques, los árboles y sus productos determinada por el género subyace en que la codificación de estos sistemas de tenencia de recursos por usos y costumbres podría no distinguir entre el lugar y la función y el valor del recurso en cuestión. Por ejemplo, los registros etnográficos podrían apuntar a una división por género de plantas y productos de modo que las plantas de las bardas son asunto de las mujeres, los huertos son dominios de las mujeres, o las zonas de recolección común lejanas están bajo la administración de las mujeres. En algunos casos, los investigadores reportan que los hombres manejan a los animales y las mujeres cultivan, mientras que, en otros casos, lo opuesto es verdad.

Estas divisiones podrían expresar complementariedad de control y manejo de recursos en dominios paralelos de igual valor, empero, dichos acomodos también podrían simplemente reflejar el hecho de que estos lugares, plantas, animales y productos de mujeres eran residuales y remanentes, partes abandonadas o no protagónicas del paisaje, atribuidas a las mujeres por su irrelevancia o importancia secundaria a las actividades de los hombres en ese momento. En el segundo caso, a medida que cambia el estatus de estos recursos y lugares, y se comercializan y aumenta su valor, podrían ser redefinidos como lugares, plantas y productos de los hombres. Dicho cambio no implicaría una erosión de los dominios determinados por el género, sino más bien una reafirmación de la ideología de género de la complementariedad flexible bajo relaciones de poder disparejas. En tal situación, los hombres no estarían borrando la marca del género en el paisaje; tan solo estarían remapeando los límites entre terrenos determinados por el género para conservar su privilegio continuo, lo que reflejaría la distribución cambiante

del poder y la riqueza en el paisaje. Esto se ha reportado ampliamente en el caso de la comercialización de la leña, lo que ha ocasionado un cambio en el control por género de los árboles, los productos, y la actividad práctica (Fortmann y Rocheleau, 1985; Hoskins, 1982).

El poder para dibujar los límites entre dominios determinados por el género reside, en distintos grados, aunque no del todo, en los hombres. En tales casos, los cambios en la tecnología, uso de suelo y tenencia introducidos del exterior pueden precipitar una redefinición y valoración radical de los "recursos" y una subsecuente reconfiguración de los espacios, especies y productos divididos por género por los hombres. De igual manera, las mujeres podrían aprovechar la oportunidad de un cambio para buscar mayor ventaja en la división por género de los recursos. El efecto a largo plazo de estos cambios en la eficiencia de la tierra y el trabajo en la producción de árboles o en la conservación del bosque podría o podría no ser positivo. Las mujeres podrían ser desplazadas o perder acceso a recursos vitales, o podrían obtener mayor flexibilidad para acceder de manera independiente a recursos por medio del mercado, según el contexto, así como la clase, etnia, edad u otras diferencias entre mujeres.[6]

Por tanto, las directrices o normas de acceso flexibles y una atención cuidadosa puesta en los grupos de mujeres como propietarias parecen mucho más adecuadas que las regulaciones rígidas a las prácticas cotidianas de los pueblos en la mayoría de las regiones de África. Las directrices flexibles están abiertas a la negociación, basadas en gran medida en las relaciones sociales y políticas entre los usuarios. Como han sugerido algunas académicas feministas posestructuralistas, ignorar el papel de la negociación en los procesos sociales permite que los grupos más poderosos naturalicen las relaciones que los benefician. Un reconocimiento explícito de la importancia de la negociación podría brindar mejores oportunidades a las mujeres para defender los derechos a los recursos existentes y para expandir esos derechos a medida que cambian las condiciones sociales y ecológicas. Las mujeres rurales reconocen la importancia de las relaciones

6 Véase el estudio de caso de Jackson (1985) del esquema de irrigación Kano y los destinos divergentes de las mujeres de dos etnias bajo las mismas intervenciones de uso de suelo y tenencia.

sociales en estas negociaciones, y a menudo invierten tiempo y energías considerables cuidando y manteniendo relaciones entre ellas, con vecinos e incluso con autoridades más distantes, como medio para asegurar el acceso a los recursos (Rocheleau, 1991; Edmunds, 1997). Existe una creciente preocupación por mejorar la influencia de las mujeres en la toma de decisiones, por fortalecer sus voces en el proceso que crea (y recrea) las reglas que rigen el acceso a los recursos y su control (Chimedza, 1988; Rocheleau, 1988a; 1991). Esto podría parecer implicar el involucramiento tanto de organizaciones de hombres como de mujeres en cada contrato de proyecto nuevo y en el desarrollo continuo de los códigos del uso de suelo (Hoskins, 1982; Fortmann y Rocheleau, 1985). También significa asegurar que las mujeres tengan igual acceso a la información técnica y administrativa que afectará el manejo de los árboles y los bosques. Solo entonces las mujeres podrán proteger sus derechos en el marco de unas condiciones de cambio social y ecológico impredecibles.

Tipología de posibilidades de acceso a los recursos en distintas dimensiones

Para ilustrar algunos de nuestros puntos de otra manera, hemos creado una tipología de acceso a los recursos que subraya cómo el acceso está determinado por género mediante distintas dimensiones. Emparejamos cada "tipo" con ejemplos tomados de estudios de caso y experiencias de campo.[7] Cada ejemplo tiene dimensiones de acceso distintas a las que hemos elegido discutir. La tipología es un aparato ilustrativo para aclarar las complejas realidades del acceso a los árboles y los bosques, no para representar esas realidades de manera completa o perfecta.

Tipos de espacio determinados por el género

En muchos lugares, los hombres y las mujeres tienen espacios distintos que toman la forma de parcelas agrícolas separadas, en las que uno o ambos o

7 "Experiencias en campo" se refiere a nuestro compartir limitado, privilegiado, personal y profesional del hogar, hábitat, comunidad, lugar de trabajo o mercado de alguien más.

ninguno tienen derechos legales de propiedad. En algunos casos, las mujeres obtienen acceso a la tierra de forma independiente de sus esposos, gozan de derechos y responsabilidades sustanciales de manejo en esas tierras y controlan los productos de su tierra y trabajo. Las mujeres pueden tener sus huertos o cultivos "de cuenta propia", como se documenta en La Gambia (Carney, 1988); los Mende en Sierra Leone o en zonas donde la ley islámica permite que las mujeres hereden propiedad (Jackson, 1985; Lastarria-Cornhiel, 1995). El título de propiedad podría facilitar que las mujeres ejerzan el control sobre el uso, el manejo y los productos de los árboles de sus parcelas, si bien no es condición suficiente para que lo consigan.

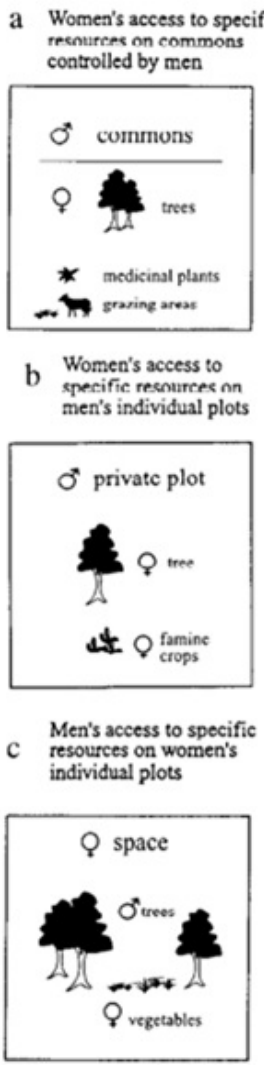
Con independencia de su condición de propietarias de tierras de las mujeres, sus bosques y árboles suelen estar en espacios controlados por hombres, ya sea en virtud del derecho consuetudinario o bajo ley estatutaria. En muchos lugares existe una necesidad real de que las mujeres obtengan títulos de propiedades de los bosques para evitar la tala, ya sea en régimen de propiedad común o privada. La opción de que los grupos de mujeres obtengan títulos formales de propiedad de la tierra o los árboles es una solución posible, aunque las relaciones desiguales de poder dentro del grupo de mujeres pueden seguir limitando el acceso de algunas mujeres a los árboles y los grupos forestales. En general, existe un margen real, pero no muchos precedentes, para la inclusión de la complejidad en las nuevas leyes o normas de procedimiento que rigen el acceso a los árboles y su uso, independientemente del régimen de propiedad de la tierra.

Acceso por género a los recursos en un espacio determinado

La separación por género y el agrupamiento de los derechos de la tierra y los árboles toma muchas formas. La Figura 1a perfila una situación en la que las mujeres tienen derechos a árboles específicos dentro de lo que generalmente se entiende como una comunidad masculina. Talle ha descrito cómo las mujeres tienen acceso irrestricto a los pozos y árboles de leña y forraje que los varones masai mantienen en sus tierras de pastura común, bajo el supuesto de que se llevan poco y utilizan los recursos para cubrir necesidades domésticas (1988). En zonas con mayor densidad poblacional de árboles, las mujeres residentes po-

drían gozar de un acceso relativamente libre a todos salvo unas cuantas especies de plantas con valor comercial en matorrales custodiados por el clan de algún hombre u otro grupo corporativo (Hoskins, 1982). Los derechos de las mujeres a los árboles, matorrales y pastizales que se encuentran en tierras comunales se basan casi en su totalidad en la ley por usos y costumbres y en los procesos políticos que las sostienen. Por tanto, deben involucrarse de vez en cuando en actividades que refuerzan sus derechos a las áreas comunales, como son la resistencia a la privatización de los bosques y matorrales (Edmunds, 1997), o la adscripción a grupos de mujeres que realizan obras en tierras comunales. Sin embargo, a medida que las tierras comunales desaparecen rápido como categoría legal en los mapas bidimensionales, las mujeres de muchas regiones están invirtiendo más tiempo en desarrollar nuevas maneras de obtener acceso a los árboles y otros recursos de bosque y matorral en tierras antes privadas. En el distrito Machakos, mujeres de Kenia han reafirmado los comunes en gran medida mediante grupos de intercambio de trabajo que negocian el intercambio de trabajo en equipo por derechos de pastoreo y recolección (que incluyen la leña y el forraje) en las propiedades de integrantes más adinerados (Rocheleau, 1991).

Figuras 1. Acceso compartido y por género a los recursos en tierras individuales, públicas y comunales. Figura 1a. El acceso de las mujeres a recursos comunales específicos controlados por hombres (tierras comunales, árboles, plantas medicinales, tierras de pastoreo). Figura 1b. El acceso de las mujeres a recursos específicos en parcelas individuales de hombres (parcela privada, árbol, cultivos para hambruna). Figura 1c. El acceso de los hombres a recursos específicos en parcelas individuales de mujeres (espacio, árboles, verduras).



La Figura 1b ilustra un caso en el que hombres individuales gozan de derechos de manejo y disposición significativos sobre una parcela de tierra (desde la tenencia formal hasta el control *de facto*), pero en el que las mujeres retienen los derechos a recolectar alimentos silvestres y plantas medicinales de los árboles, matorrales y plantas anuales. Las mujeres incluso pueden gozar del derecho al manejo de algunos de estos recursos, como cuando siembran, protegen y podan los árboles *Sesbania sesban* "con maleza" de las parcelas de los hombres (Bradley, 1991), o siembran algodón u otras "cositas" en medio de los campos de arroz tierra arriba de los hombres (Leach, 1992). Hasta donde tenemos conocimiento, aún falta para que esos derechos sean reconocidos oficialmente por la ley estatutaria en la región, pero siguen protegidos bajo la ley por usos y costumbres de una amplia gama de etnias. Sin embargo, como ya hemos mencionado, los derechos de acceso de las mujeres a estos recursos están bajo amenaza a medida que la comercialización de la agricultura cambia los sistemas de cultivo a monocultivos estrictamente controlados, que dejan menos "cositas" y "árboles silvestres" en el campo. Las intervenciones tecnológicas que no pueden tolerar "malezas", zonas de matorrales, policultivos y otros "espacios" donde las mujeres encuentran variedad de recursos, deberían, por tanto, ser desalentadas en la mayoría de las circunstancias, o se deben hacer concesiones para espacios alternativos para los árboles y cultivos "menores" de las mujeres, o para parcelas separadas para las mujeres (en posesión de individuos o grupos).

Los derechos de los hombres a los árboles en tierras propiedad de mujeres se ilustran en la Figura 1c. McLain ha descrito este caso de mujeres en Mali, que han tomado tierra prestada para cultivar (1992). Sin embargo, incluso donde las mujeres tienen un interés de más largo plazo en la tierra, los hombres pueden ejercer derechos de disposición de los árboles que ahí se encuentran. Esto aplica en particular a las especies maderables que ayudan a que los hombres cumplan con sus responsabilidades de construir casas, o con sus intereses de obtener dinero. Schroeder ha descrito cómo los terratenientes masculinos utilizaron proyectos de rehabilitación ambiental para sembrar árboles en medio de los huertos de las mujeres, aprovechándose del trabajo de las mujeres para mantener bardas y para regar árboles,

y capturando los pozos instalados con anterioridad para proyectos de las mujeres (1993). También señala cómo este derecho amenaza la gestión de las mujeres de sus huertos, debido a que a la postre los árboles lanzan sombra sobre las verduras debajo de ellos. Bajo estas condiciones, los planificadores de proyectos podrían ayudar más a las mujeres promocionando recursos que sigan cayendo bajo el control de las mujeres, como especies no maderables, no comerciales de árboles frutales. Otra alternativa sería que los árboles comerciales de las mujeres estén vinculados a operaciones de mercadotecnia y procesamiento integradas de forma vertical bajo el control de mujeres, suponiendo que las instituciones sociales y políticas locales apoyarían o al menos tolerarían una iniciativa así.

Productos por género de un determinado recurso

A medida que ampliamos más la mirada hacia las características del paisaje, encontramos ejemplos de productos específicos sobre los cuales las mujeres pueden tener control, a pesar de que se asocien con los recursos y las tierras bajo el control de los hombres. La Figura 2a es un ejemplo donde una mujer tiene acceso a las frutas que se encuentran en los árboles que ella ha cuidado, aunque el "dueño" es su esposo y el árbol se encuentra en la propiedad privada de él. Los investigadores han descrito un caso así del distrito de Siaya, Kenia, basado en un uso por género de los árboles descrito por los participantes de un Proyecto Agroforestal de Care Kenya (Feldstein *et al*., 1989). De nuevo, no se trata de un esposo que simplemente le da fruta a su esposa; ella tiene derechos de recolección y uso reconocidos por otros usuarios, incluyendo su esposo. En otro caso de Siaya, las mujeres dijeron que se negarían a cocinarle a un hombre que se negara a permitirles recolectar leña de los árboles del compuesto y de la parcela, y su afirmación encontró apoyo entre los ancianos hombres de la aldea (Feldstein *et al.,* 1989). Sin embargo, en muchas partes de Siaya las mujeres enfrentan restricciones para la recolección de leña de árboles de Albizia y Markhamia. Estos árboles se usan para la construcción, considerado un "uso más elevado" y necesario para las responsabilidades de los hombres. Las mujeres no cuentan con un acceso directo a muchas

otras especies de menor valor. En el cercano distrito de Kakamega, la recolección de leña de las mujeres puede limitarse a la compra de árboles enteros de hombres de otros hogares o a la recolección periódica de leña como un subproducto de la cosecha de árboles de eucalipto para madera de sus esposos.

La Figura 2b ilustra un caso en el que los recursos controlados por los hombres en tierras comunales brindan productos específicos para las mujeres. Las mujeres a menudo cuentan con derechos reconocidos a las ramas que quedan después de que los hombres talan árboles para postes o madera en bosques comunitarios (Hoskins, 1982). Reconocer y reforzar estos derechos no comerciales de recolección, tanto en la evaluación de los costos y beneficios de cualquier cambio propuesto en el uso de suelo como en la formación de políticas públicas, otorgaría un apoyo significativo a los esfuerzos de las mujeres por mantener y expandir su acceso a recursos vitales de árboles, bosques y matorrales.

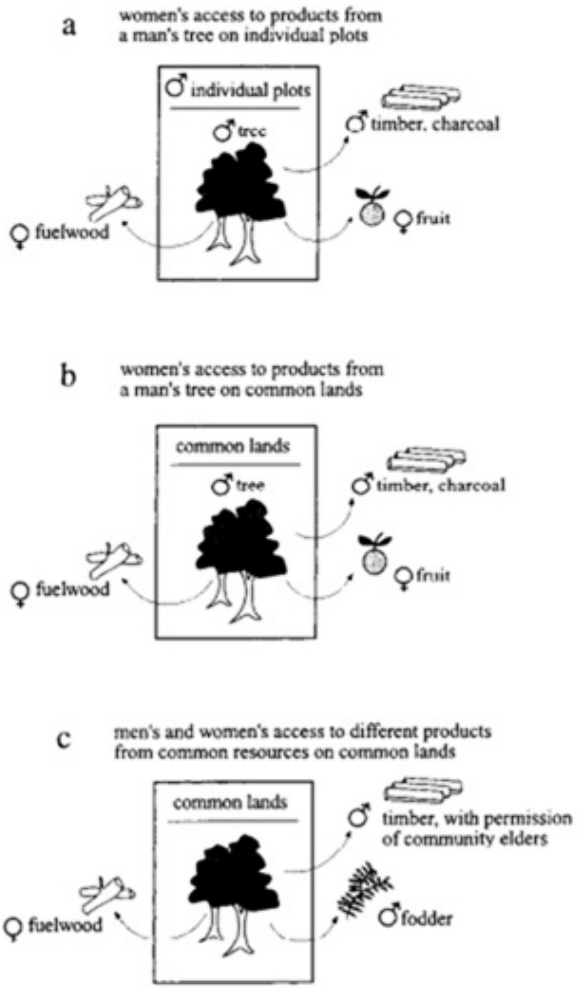
El acceso por género a lo largo del tiempo

El acceso de las mujeres a espacios, recursos y productos y al control sobre ellos puede variar de manera significativa en el transcurrir del tiempo, dependiendo de cambios en un abanico de factores sociales y ecológicos y en la manera en la que estos cambios se negocian entre hombres y mujeres. En Sierra Leona el manejo de un solo espacio es la responsabilidad de los hombres durante los periodos de cultivo de cacahuate y de las mujeres durante los periodos de "barbecho", como lo describe Leach (1992). Un cambio estacional más estricto ocurre entre los turkana, donde los *ekwars* (parches de bosque ribereño) que son manejados más de cerca por los hombres para el forraje de ganado durante la temporada seca, pasan más fácilmente al control de las mujeres durante la temporada húmeda para el cultivo de sorgo, forraje de cabras y ventas de leña (Barrow, 1992).

La tenencia de recursos por usos y costumbres a menudo es sensible a cambios periódicos en las condiciones ecológicas que son menos predecibles. En algunas partes del distrito de Machakos, Kenia, el acceso a

los recursos de forraje en propiedad privada está muy controlado durante los años en los que otras fuentes de forraje son abundantes, pero podrían reabrirse para los vecinos, amigos y familia extendida cuando una hambruna golpee la zona, como en 1985 (Rocheleau, 1991). El acceso *de facto* de las mujeres a los recursos también podría mejorar durante periodos de mucha migración de los hombres al exterior, como ha ocurrido en zonas donde hay disponibilidad de trabajo por temporada en fincas. Quizá la mejor manera de proteger los derechos de las mujeres en condiciones sociales y ecológicas fluidas es asegurar que tengan una voz en los procesos de toma de decisión que respondan a dichas circunstancias cambiantes. Esto significa involucrar a las organizaciones, grupos de iglesias y otras asociaciones de mujeres en las que una diversidad de mujeres tenga una presencia significativa e influyente en un proceso continuo de desarrollar, evaluar, reestructurar e implantar códigos de conducta y, cuando sea apropiado, contratos de manejo de recursos. Si la participación de las mujeres se limita a las fases iniciales de una intervención particular, los hombres podrían responder a las circunstancias cambiantes y la restructuración de actividades sin una negociación adecuada con las mujeres (como grupo) sobre los derechos a los recursos. Personal de manejo de recursos podría facilitar la participación plena de las mujeres durante el transcurso de un proyecto o programa forestal mediante una revisión rigurosa y focalizada en lo local de la compartición y división de los recursos, que aborde las preocupaciones distintas y compartidas tanto de los hombres como de las mujeres y de clase, étnicas y de grupos de edad.

Figuras 2. El acceso compartido y por género a productos particulares de recursos específicos. Figura 2a. El acceso de las mujeres a productos del árbol de un hombre en parcelas individuales (parcelas individuales, árbol, leña, madera, carbón, fruta). Figura 2b. El acceso de las mujeres a productos del árbol de un hombre en tierras comunales (tierras comunales, árbol, leña, madera, carbón, fruta). Figura 2c. El acceso de hombres y mujeres a distintos productos de recursos comunes en tierras comunales (tierras comunales, leña, madera, con el permiso de los ancianos de la comunidad, forraje).



Estudios de caso en tenencia agrupada

La tipología por género de la tenencia de árboles es una abstracción diseñada para ilustrar algunas de las maneras en las que el acceso a los recursos puede estar determinada por el género. Sin embargo, varios tipos de acceso por género pueden funcionar en un mismo momento en cualquier comunidad determinada. Estas tenencias distintas se "agrupan" una dentro de la otra. Esto no se debe entender como una presunción de estabilidad o complementariedad, pues las relaciones entre tenencias dependen de condiciones ecológicas y sociales dinámicas que repetidamente obligan a hombres y mujeres a renegociar sus términos de acceso a recursos específicos. Sin embargo, se pueden discernir algunos patrones y nos pueden ayudar a entender mejor los regímenes de tenencia cambiantes en este y otros lugares.

Dos estudios de caso de Kenia ilustran la complejidad de la tenencia agrupada. La primera se basa en el trabajo de campo en el distrito de Siaya en una comunidad agrícola con un acceso al agua relativamente bueno y densidades de población moderadas, así como con recursos acuáticos y forestales significativos. Un segundo caso en el distrito de Machakos representa una comunidad agrícola en una región más seca donde los bosques varían desde grandes extensiones de bosque degradado a pequeños parches de restos lineares de especies diversas de bosque seco en paisajes agrícolas. Si bien esta muestra no puede representar los diversos regímenes de tenencia en Kenia, o en toda África, son indicativos de esa diversidad y nos alertan sobre la proliferación de configuraciones de tenencia que se agrupan o se solapan en cualquier comunidad determinada.

a) Comunidad agrícola Luo en el distrito de Siaya, Kenia

Pala-Okeyo (1980) documentó la pérdida de las mujeres de sus derechos por usos y costumbres al acceso y uso de la tierra en esta región durante las reformas de tenencia de la tierra (privatización) que tuvieron lugar desde la década de los cincuenta a la de los setenta. Describió un sistema de asignación y manejo de recursos en la que los derechos de acceso y uso de los

recursos de las mujeres se incluían en la propiedad comunal controlada por el linaje masculino. Los derechos de las mujeres se asignaban a las mujeres como grupo para el uso de los bienes comunales y a mujeres individuales por medio de sus esposos. Sus recursos individuales incluían algunos recursos compartidos en el hogar de la familia extendida y sus propias parcelas de cultivo individual, repartidas después por los esposos a esposas individuales y subsecuentemente a sus hijos y las esposas de sus hijos.

Durante la década de los ochenta el proyecto agroforestal Care Kenia se propuso abordar los problemas de escasez de leña y deforestación en Siaya, así como contribuir a la producción de cultivos y ganado mediante productos y servicios de árboles. El proyecto buscó no solo involucrar, sino servir a las mujeres campesinas como constituyentes, y como parte de ese esfuerzo, el personal de campo recopiló información sobre las normas preponderantes en torno a la tierra y la tenencia de los árboles,[8] mucho después de la reforma de la tenencia de la tierra. Las mujeres y hombres que respondieron sus preguntas observaron que los usos y costumbres luo no permitían que las mujeres sembraran árboles y que todos los árboles debían ser sembrados por hombres, y que en consecuencia les pertenecían. Esta regla se relacionaba con el reconocimiento de la siembra de árboles como una marca de propiedad. Además, esperaban que los hombres elegirían las variedades y determinarían la distribución de los árboles. Los participantes observaron que los arbustos (en específico, *Sesbania seban*) eran propiedad de las mujeres —para sembrar en tierras arables, administrar, usar y disponer de la forma que desearan— entre el pueblo vecino Luhya (Bradley, 1991), así como entre los luo. Los hombres y las mujeres también expresaron interés en distintos productos del proyecto de árboles: los hombres, por lo general, querían postes, madera y forraje, mientras que las mujeres tendían más a querer leña y forraje. Ambos mostraron algún interés en mejorar la fertilidad del suelo, un servicio que ya brindaban los sesbania sembrados por las mujeres en sus tierras de cultivo.

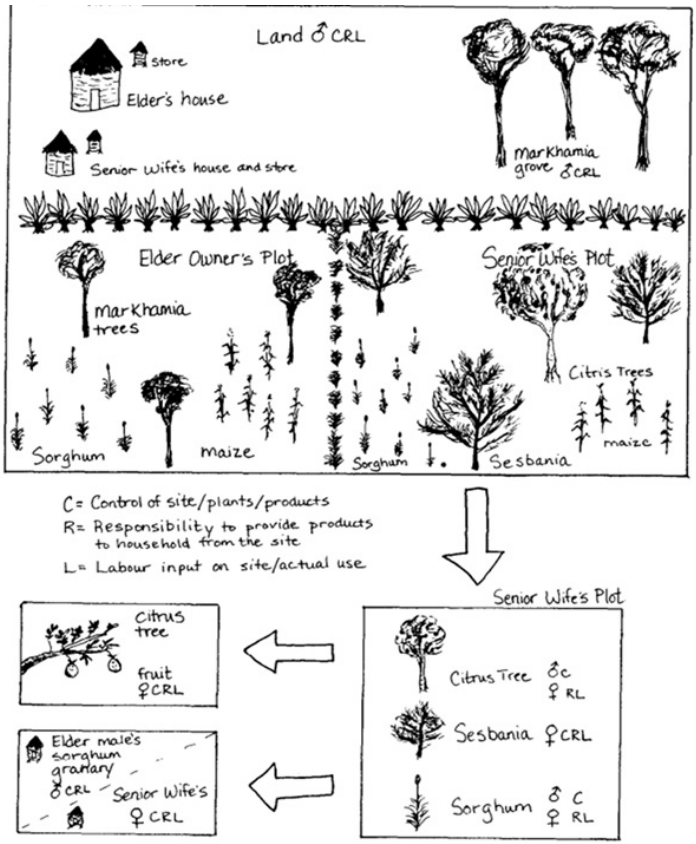
8 Dianne Rocheleau trabajó con integrantes del personal de Care Kenia para desarrollar métodos de extensión e investigación de campo, y participó en la ronda inicial de entrevistas grupales y entrevistas de informantes clave, incluyendo las discusiones sobre la tenencia por género de la tierra, los árboles y productos de árboles.

La división por género preponderante de la tierra, los árboles, los matorrales, los cultivos y sus productos al inicio del proyecto en 1985 se ilustra en la Figura 3. La división por género de los derechos, responsabilidades e inversión de trabajo en la tierra, las plantas y los productos aparece en la imagen como parte de las propiedades de un hombre que es cabeza de una unidad familiar polígama, mostrando el compuesto principal del hogar, el campo del hombre que encabeza y el campo de la primera esposa. No aparece el campo de la segunda esposa. Los añadidos del campo, los árboles y los productos de la primera esposa dan muestra no solo de una división agrupada por género, de la tenencia, sino también de diferencias sustanciales en la tenencia entre especies. El hombre mayor es dueño de la tierra, así como de los árboles y, algunos dirían, incluso de los cultivos en los campos. Una vez que los cultivos de granos se cosechan y almacenan, son propiedad de las mujeres. De igual manera, el árbol cítrico pertenece al hombre mayor, pero las frutas del árbol cítrico pertenecen a la primera esposa, quien lo cuida, sin importar quién lo haya sembrado. Los arbustos sebsania pertenecen a las mujeres.

El equipo del proyecto desarrolló en un inicio dos estrategias para abordar tanto los intereses por género de la vivienda como la situación por género de la tenencia. En primer lugar, definieron los viveros de árboles como sitios de trabajo de las mujeres (una práctica cada vez más común en proyectos comunitarios de árboles en Kenia en 1985) y también eligieron especies de árboles según las preferencias de productos y especies del grupo de mujeres (casi sin precedente en el ámbito nacional). Una vez que las mujeres habían elegido las especies y criado las plántulas de muchas de ellas, muchas pasaron a sembrar los árboles ellas mismas, con lo que rompieron con la costumbre local de antaño y fortalecieron su inversión en sus granjas. Entre aquellas que no sembraron sus propios árboles, la mayoría eligieron la distribución y el esparcimiento (a menudo en bardas o setos verdes en las parcelas de cultivo) y sus esposos o hijos sembraron los árboles. En algunos casos, los hombres eligieron el lugar y el acomodo de la siembra de las plántulas de los viveros de las mujeres. En segundo lugar, la elección y la representación de las especies también influyó en la división por género del trabajo de siembra de árboles y los subsecuentes derechos a ellos. El

personal del proyecto introdujo el *Leucaena leucocephalla* como arbusto para identificar este árbol de leña y forraje como una planta de las mujeres, y podaron plántulas de algunas otras especies para alentar el crecimiento de ramas y una forma de arbusto, en vez de una forma de crecimiento recta y alta. El proyecto también desalentó inicialmente el eucalipto de los viveros y no permitió la venta de plántulas; ambas cosas que desviaron el interés de los hombres en las plántulas de los viveros del proyecto. Pero después de surtir la demanda de sus propias granjas (50-200 árboles cada uno, sumando hasta millones de árboles sembrados en las granjas del distrito), muchas mujeres sí deseaban utilizar sus viveros para la producción comercial de plántulas de árboles maderables para vender a los hombres.

Figura 3. Hogar Funit en el distrito de Siaya, Kenia.



En este caso, las preocupaciones por la tenencia rápidamente pasaron del control de los árboles en sus propias tierras del hogar, al control de los viveros de los grupos de mujeres y la disposición de sus plántulas como productos. Las reglas del proyecto instituidas al inicio para garantizar la siembra de "árboles de mujeres" obstaculizaron después el desarrollo de viveros comerciales. La experiencia en Siaya sugiere que los proyectos forestales y agroforestales quizá deban reevaluar hasta las prácticas y políticas relacionadas con la tenencia más exitosas para adaptarse a las condiciones cambiantes y las etapas distintas del desarrollo de proyectos (Scherr, 1988; 1990; 1994).

b) Comunidad agrícola Akamba en el distrito de Machakos

Según algunos relatos, los akamba originalmente fueron cazadores que llegaron a lo que ahora es el distrito de Machakos, Kenia, al sur del monte Kilimanjaro (ahora Tanzania) a partir de 1500 (Lambert, 1947a; 1947b). La sociedad matrilineal se reorganizó como un linaje paterno con el establecimiento de los clanes que permanecen hasta la fecha, y empezaron a mantener grandes rebaños de ganado para cultivar pequeños huertos intensivos cerca de sus corrales del hogar. A lo largo de los últimos cien años, bajo el ímpetu de la colonización europea, y más tarde, ante el "desarrollo nacional", el pueblo akamba ha sido desplazado de grandes tramos de sus mejores tierras para agricultura y pastoreo, y luego reubicados y sedentarizados como "productores" y "residentes", además de movilizársele como mano de obra pagada. A lo largo de la región que han ocupado desde 1500 (ahora compuesta por los distritos Machakos, Makuweni, Kitui y Mwingi) han transitado (en distintos grados) de la migración estacional y periódica y el agropastoreo a la agricultura sedentaria mixta. También han transitado de asentamientos patrilineales de familia extendida con bienes comunales en el ámbito de aldea y región a compuestos de familias nucleares en propiedad privada. Si bien la publicidad inicial del Gobierno colonial, de cercamiento y privatización, enfrentó una resistencia generalizada (desde las décadas de los treinta y cuarenta del siglo XX), desde entonces las líneas del mapa del topógrafo han marcado los bordes de

una reestructuración masiva espacial y ecológica a lo largo del territorio Ukambani (Bernard *et al*., 1989).

La actual división por género de la tierra, los árboles y sus productos en Kathama, ilustrado abajo, refleja la reconciliación y continua negociación entre el *ethos* de la práctica por usos y costumbres en el hogar y la comunidad y la evaluación legal de la propiedad privada completada (en este caso) en 1972. Mientras las zonas más densamente pobladas de la región han sido valuadas, algunas desde 1955, la mayoría de las tierras semiáridas de Ukambani no han sido valuadas formalmente. Sin embargo, anticipando la llegada del sondeo continuo en su comunidad, la mayoría de los campesinos akamba y oficiales locales operan en un marco de pequeñas parcelas dentro de un régimen de propiedad privada. La pérdida de los bienes comunales, de múltiples parcelas complementarias y tierras lejanas de pastoreo común, ha alterado de modo sustancial el acceso práctico de los hombres y las mujeres al alimento, combustible, forraje, fibra y recursos de agua.

Las Figuras 4 y 5 ilustran las divisiones vigentes en el uso y la inversión del trabajo, la responsabilidad del manejo y el control (legal o práctico) sobre los recursos en tierras que forman parte de hogares o del "monte" cercano. Las segundas, desde el plano legal tienen dueños privados, pero condicionalmente son tratadas como comunales a discreción del dueño. Historias orales de esta comunidad sugieren que ha prevalecido durante bastante tiempo una ética de complementariedad flexible bajo relaciones desiguales de poder. La distribución real del trabajo, del control y de la responsabilidad por género de recursos, actividades y productos específicos ha cambiado de manera constante a lo largo del último siglo. La situación en el dibujo (a partir de 1986) fue una en la que la mayoría de los hombres adultos habían migrado para trabajar como obreros, y dejaron a las mujeres como productoras y administradoras en pequeñas propiedades de hombres, controladas por ellos.

La siembra y tala de árboles han sido dominios principalmente de los hombres, mientras que las mujeres han gozado de derechos al acceso y al uso para forraje (hojas y vainas), leña, fibra, fruta y abono (hojas). La diferencia reside entre el consumo definitivo y los usos renovables,

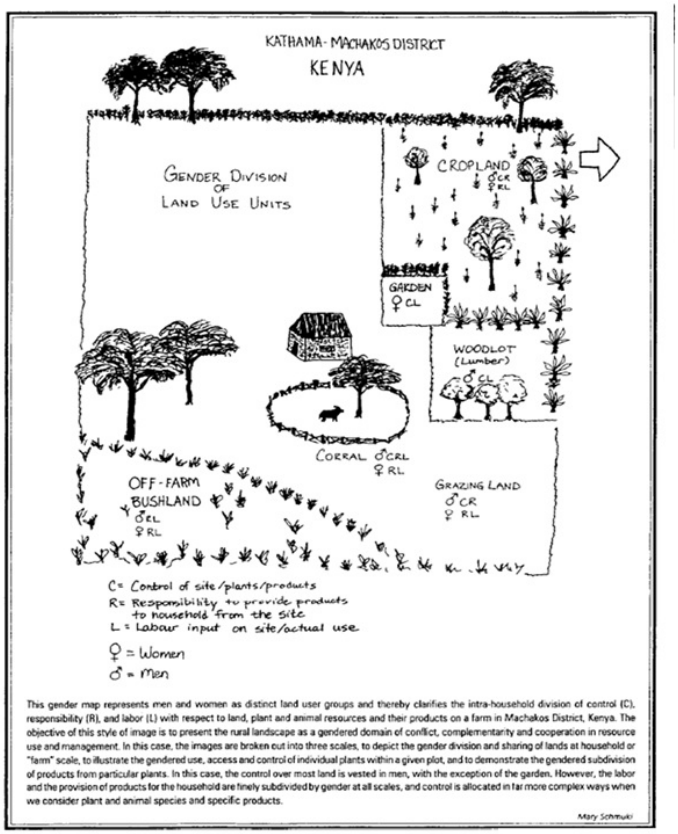
y en los derechos para crear, colocar o disponer de recursos de árboles en una granja, contra los derechos a un recurso ya existente. En cuanto a las características del paisaje, la división por género del derecho a los árboles está (de modo informal, en la práctica) regulada según el lugar (obsérvese los derechos compartidos en tierras de cultivo, bardas y, hasta cierto punto, tierras de pastoreo, y los huertos y espacios domésticos de las mujeres contra los lotes de bosque de los hombres). El acceso por género también lo determina la especie (e.g., *Lantana camara*, *Acacia brevispica*, contra *Acacia tortilis* y *Commiphora* spp.), por árboles exóticos sembrados (*Eucalyptus*, *Neem*, *Cassia* y *Jacaranda* contra especies nativas como *Combtretum*, *Commiphora* y *Accacia* spp.), y por forma de crecimiento (arbustos o árboles en general y el reverdecimiento en matorrales de acacias, contra los árboles grandes erguidos de la misma especie).

El tipo de producto también divide los dominios de los hombres y las mujeres: la madera verde de los hombres contra la madera seca de las mujeres, por ejemplo, o las frutas, nueces y árboles pequeños de las mujeres contra el carbón, los troncos, la madera, las ramas grandes y los postes de los hombres. Las mercancías y mercados por género también ejercen control sobre distintos espacios y productos: el carbón de los hombres contra la leña de las mujeres; el control "mixto" de cítricos, papaya, mango y verduras comerciales contra los cultivos "tradicionales" de las mujeres como las hojas de chícharo salvaje; los tallados de madera de los hombres contra las canastas y cuerdas de las mujeres; el ganado de los hombres contra los cultivos de las mujeres; las cabras de los hombres contra las gallinas y huevos de las mujeres. En muchos casos, los productos de las mujeres son recolectados de los árboles de los hombres, o las plantas de las mujeres están anidadas en el paisaje de los hombres, como las bardas. Los productos de las mujeres a menudo son "subproductos" o sus plantas ocupan espacios secundarios dentro de lugares o características del paisaje con un bajo costo de oportunidad para las empresas y plantas de los hombres.

Como parte del Proyecto Agroforestal Kathama, durante la década de los ochenta, los hombres de la comunidad participaron en una serie de experimentos *in situ* con "sistemas de cultivos en callejones" (cultivo de setos vivos *Leucaena leucocephala* intercalado con maíz). Tras una ronda

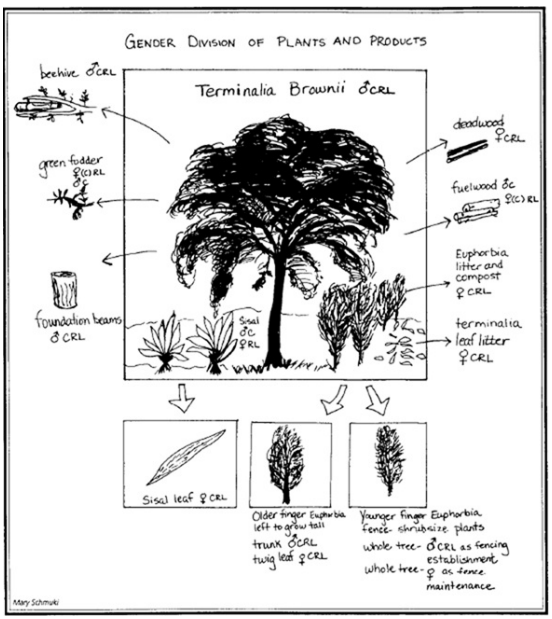
inicial de pruebas de cultivo en callejones para mejorar la fertilidad de la tierra y producir leña (ambas, preocupaciones de las mujeres), las mujeres notaron su desilusión con la producción de abono y leña a comparación de sus anteriores fuentes de estos productos. Los hombres observaron un distinguido interés en los postes y el forraje, y a menudo empezaron a administrar los setos vivos como si fueran hileras de postes o como pastura para sus cabras. Ni los hombres ni las mujeres obtuvieron lo que querían de la nueva tecnología debido a que el diseño había fallado en incorporar las relaciones de género en la tenencia y el flujo de productos en granjas pequeñas.

Figura 4. Distrito Kathama-Machakos, Kenia, Reimpreso con el permiso de Cultural Survival Quarterly.



Este mapa de género representa a los hombres y las mujeres como grupos de usuarios de la tierra del distrito, y de ese modo aclara la división intrahogar del control (C), la responsabilidad (R) y el trabajo (L) en relación con los recursos de tierra, plantas, animales y sus productos en una granja en el distrito Machakos, Kenia. El objetivo de este tipo de imagen es presentar el paisaje rural como un dominio, en conflicto, articulado por el género, la complementariedad y la cooperación en el uso y manejo de los recursos. En este caso, las imágenes se dividen en tres escalas, para plasmar la división por género y cómo se comparten las tierras en el hogar o la "granja", para ilustrar el uso, acceso y control por género de plantas individuales dentro de una determinada parcela, así como para demostrar la subdivisión por género de los productos de plantas específicas. En este caso, el control de la mayor parte de la tierra está vertido en los hombres, con excepción del huerto. Sin embargo, el trabajo y la provisión de productos para el hogar están finamente subdivididas por el género en todos los niveles, y el control se asigna de maneras mucho más complejas cuando consideramos las especies de plantas y animales y productos específicos.

Figura 5. División de plantas y productos por género. Reproducido con permiso de *Cultural Survival Quarterly*.



Como parte de una expansión del proyecto con los grupos de mujeres focalizada a la comunidad entera, las mujeres en Kathama criaron plántulas, principalmente en viveros de grupos de mujeres, y sembraron huertos "emergentes", experimentales, en espacios dentro del complejo de su hogar o sobre las bardas o límites internos. Las parcelas de árboles (para madera, leña y forraje) estaban limitadas sobre todo a los hombres o las mujeres cabezas del hogar, y en algunos casos, administradoras mujeres de las granjas con el permiso de sus esposos ausentes. Si bien muchas mujeres han criado grandes cantidades de plántulas de papaya y otras frutas en sus viveros grupales, así como árboles para leña, forraje y postes, la papaya se ha convertido en un gran cultivo lucrativo en la región y podría caer pronto bajo el control de los hombres o cabezas del hogar y administradores de granjas. Como en el caso de Siaya, observado por Scherr (1988; 1990), el género por sí solo no explica la división del control de los árboles y sus productos. Sin embargo, podemos decir con seguridad que las relaciones de tenencia por género y la complementariedad flexible bajo relaciones desiguales de poder son centrales para la distribución del poder sobre las plantas y sus productos en este paisaje. La elección de las especies, la distribución y los productos y sus estrategias de mercadotecnia bajo las nuevas tecnologías agroforestales afectarán tanto el paisaje como las relaciones de género en esta comunidad y otras similares. El reto es hacer consciente, justo y efectivo ese proceso en términos sociales y ecológicos, además de económicos.

Conclusión

Algunas obras recientes sobre la tenencia han llamado nuestra atención a la diferencia entre los derechos legales y los derechos de facto, así como entre los derechos legales contra el verdadero control de los recursos del bosque y de los árboles, con líneas de conflicto, coexistencia o cooperación que son dibujadas por la clase, el género, la casta u otros polos de identidad y diferencia. Alrededor del mundo, las mujeres han sido excluidas del acceso a una amplia gama de recursos de la tierra, los bosques y los árboles, y del control sobre ellos y sus productos por medio de intervenciones que

abarcan desde reformas de tenencia agrarias y granjas por contrato hasta la protección de los bosques. Hemos revisado varias instancias de cambios en la determinación por género de la tenencia relacionados con los árboles, los bosques y la tierra en África, con énfasis en ejemplos específicos de Kenia. Las desventajas en la tenencia para las mujeres, sin embargo, podrían no ser inherentes a las intervenciones *per se*, sino que podrían encontrarse en la intersección entre ideologías de género tanto locales como externas que chocan entre sí o con una tecnología específica o cambio de uso de suelo. La ideología de género local podría ser de complementariedad flexible bajo relaciones desiguales de poder, mientras que las ideologías de género externas podrían proyectar intereses compartidos y jerarquías fijas de poder por género bajo estructuras patriarcales (e.g., la perspectiva "occidental" globalizada), o bien podría basarse en la correlación feminista liberal de la igualdad de género sin diferenciación. El resultado de los cambios en uso de suelo y la tecnología también podría ser bastante distinto en condiciones de deforestación en tierras con bosques contra la reforestación o forestación del paisaje agrícola o pastoral. De igual manera, los cambios legales en la tenencia pueden producir efectos muy distintos en las relaciones de género que un cambio grande en el uso del suelo y de la cubierta dentro de un lugar determinado, ya sea comunal o dentro de un hogar ancestral o una parcela de hogar en un proyecto de reasentamiento.

En respuesta a la complejidad y diversidad de los sistemas existentes de uso de suelo, de regímenes de propiedad y de división por género del trabajo y de la autoridad, sugerimos que el diseño de políticas y tecnologías forestales y agroforestales empiecen en cada caso con una serie de preguntas sobre el género, los árboles y la tenencia. En vez de prescribir una respuesta fija a lo que es complejo, variable y dinámico, abogamos por la atención cuidadosa a la equidad de género y la clase en procesos y procedimientos, en la definición de las partes interesadas y en la elección de instituciones para representar a diversas circunscripciones. Esto podría significar trabajar con diversos grupos que representan a las personas en circunscripciones agrupadas y solapadas, que reflejan los múltiples roles, identidades e intereses de los hombres y las mujeres mediante la clase, la ubicación, la ocupación y otros puntos de diferencia y afinidad. También

sugerimos de manera enfática "mapear" los recursos por género, así como las relaciones de poder por género (Slocum *et al*., 1995; Rocheleau *et al*., 1995). El poder determinado por género para planear, diseñar, reconfigurar o resistirse a la reconfiguración del paisaje y el reensamblaje de las comunidades de plantas es un gran problema para el futuro.

Quizá el reto más importante es crear los mecanismos para la discusión, la negociación y el arbitraje de regímenes de género de la tenencia bajo una diversidad de circunstancias. Las agencias nacionales e internacionales pueden ayudar a definir reglas procesuales sólidas para procesos que abarquen desde la adjudicación de tierras hasta la venta de productos de árboles. Las agencias que promueven cambios en la tecnología de los bosques y el uso de suelo también podrían necesitar desarrollar instrumentos legales flexibles para formalizar (o crear) códigos complejos de múltiples usos que reconozcan, concilien y quizá reformen los derechos por género para usar los bosques, los árboles y sus productos. Como en el caso de los derechos a la tierra en el sur de Asia, que describe Agarwal (1994), los derechos de las mujeres a los árboles en muchos hogares dentro de diversas comunidades podrían garantizarse de la mejor manera (ya sea manteniéndose o expandiéndose) mediante la tenencia de grupos de mujeres a nombre de individuos, ya sea como miembros de un colectivo o como accionistas en una empresa corporativa con reglas de pertenencia, participación y distribución de beneficios y recursos bien definidas. En otros hogares y comunidades, los bosques y los árboles de las mujeres podrían florecer bajo regímenes públicos, privados o comunales, sin o con lugares, plantas y productos separados asignados a las mujeres por usos y costumbres o leyes estatutarias. Los contratos de proyecto para la producción y venta de productos de árboles particulares también pueden servir como instrumentos para expandir o mantener el acceso de las mujeres a los bosques, los árboles y sus productos. En el último análisis, una mayor igualdad en la tenencia de los árboles (incluyendo los bosques, los árboles y sus productos) dependerá de una atención enfocada en las estructuras internas dentro de las agencias de planeación y apoyo técnico. También dependerá de la implantación innovadora de métodos participativos para la discusión exhaustiva de las relaciones de poder entre los géneros, su intersección con los regímenes de propiedad y los posibles futuros de ambos.

Referencias[9]

Agarwal, B. (1994). Gender and command over property: a critical gap in economic analysis and policy in South Asia. *World Development*, *22*, 1455-1478.

Agarwal, B. (1995). *A field of one's own: gender and property in South Asia*. Cambridge University press.

Antwi-Nsiah, C. (1991). *Analysis of the problem of gender, class and regional inequalities in peripheral states: a case study of Ghana* [tesis de doctorado, University of Illinois, Champaign-Urbana].

Arizpe, L., F. Paz y M. Velásquez. (1993). *Cultura y cambio global: percepciones sociales sobre la deforestación en la Selva Lacandona*. Miguel Angel Porrúa.

Asamba, I. y B. Thomas-Slayter. (1995). From cattle to coffee: transformation in Mbusyani and Kyavaluki. En B. Thomas-Slayter y D. Rocheleau (eds.). *Gender, environment, and development. A grassroots perspective* (pp. 129–149). Rienner.

Barrow, E. (1992). *Pastoralist resource management systems in Kenya*. African Center for Technology Studies.

Behnke, R. y H. Scoones. (1992). *Rethinking range ecology: implications for rangeland management in Africa*. Drylands Network Programme, Issues Paper No. 33. LIED/ODI.

Bernard, F., D. Campbell y D. Thom. (1989). Carrying capacity of the eastern ecological gradient of Kenya. *National Geographic Research*, *5*, 381-406.

Berry, S. (1993). *No condition is permanent*. University of Wisconsin Press.

Berry, S. (1989). Social institutions and access to resources. *Africa*, *59*, 41-55.

9 N. de T.: Algunas referencias de este apartado han sido actualizadas para ajustarse al formato de citación APA. Se complementó con información adicional (títulos completos de revistas, paginación y nombres completos de los autores, entre otros), por lo que dichas referencias difieren de las referencias presentes en el artículo original. Otras referencias no fueron actualizadas en su totalidad, debido a información no localizada o por omisiones en el texto de origen.

Bradley, P. (1991). *Woodfuel, women and woodlots*. Macmillan.

Bruce, J. (1989). *Rapid Appraisal for resource tenure issues*. Food and Agriculture Organization.

Bruce. J., L. Fortmann y C. Nhira. (1993). Tenures in transition, tenures in conflict: examples from the Zimbabwe social forest. *Rural Sociology*, *58*, 26-642.

Campbell, C. (1996). Out on the front lines but still struggling for voice: women in the rubber tappers' defense of the forest in Xapuri, Acre, Brazil. En D. Rocheleau, B. Thomas-Slayter y E. Wangari (coords.). *Feminist political ecology: global perspectives and local experiences* (27-62). Routledge.

Carney, J. (1988). Struggles over land and crops in an irrigated rice scheme: the Gambia. En J. Davison (ed.). *Agriculture: women and land* (59-78). Westview Press.

Carney. J. (1992). Peasant women and economic transformation in the Gambia. *Development and Change*, *23*, 67-90.

Carney, J. y M. Watts. (1990). Manufacturing dissent: work, gender and the politics of meaning in a peasant society. *Africa*, *60*, 207-241.

Chavangi, N. (1984). Cultural aspects of fuelwood procure. ment in Kakamega District. *Kenya Woodfuel Development Project (KWDP)*. Working Paper Num. 4, KWDP.

Chimedza, R. (1988). *Women's access to and control over land: the case of Zimbabwe* [ensayo AEE, 10/ 88, University of Zimbabwe, Harare].

Croll, E. y D. Parkin. (1992). Bush base: forest farm: culture, environment, and development. Routledge.

Davison, J. (1988). *Agriculture, women and land*. Westview Press.

Edmunds, D. (1991). *Forestry in Zaire. Report on the WWF/ US mission to Zaire*, octubre-diciembre de 1990. WWF/ US.

Edmunds, D. (1997). *Continuity and change in the resource management institutions of communities bordering the Kibali Forest Park, Uganda*. Clark University.

Feldstein H., D. Rocheleau y L. Buck. (1989). Kenya: agroforestry extension and research: a case study from Siaya district. En H. Feldstein y S. V. Poats (eds.). *Working together: gender analysis in agriculture* (191–209). Kumerian Press.

Fortmann, L. (1985). The tree tenure factor in agroforestry with particular reference to Africa. *Agroforestry Systems*, *2*, 229-251.

Fortmann, L. (1995). Talking claims: discursive strategies in contesting property. *World Development*, *23*, 1053-1064.

Fortmann, L. y J. Bruce. (1988). *Whose trees? Proprietary dimensions of forestry*. Westview Press.

Fortmann, L. y N. Nabane. (1992). Fruits of their labors: gender, property, and trees in Mhondoro district. *Natural Resource Management Occasional Paper 7*. Centre for Applied Social Sciences, University of Zimbabwe.

Fortmann, L. y D. Rocheleau. (1985). Women and agroforestry: four myths and three case studies. *Agroforestry Systems*, *2*, 253-272.

Haraway, D. (1991). *Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature*. Routledge.

Harding. S. (1991). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives*. Cornell University Press.

Hoskins, M. (1982). *Social forestry in West Africa: myths and realities* [ponencia en la reunión annual de la American Association for the Advancement of Science, Washington, D.C.].

Jackson. C. (1985). *Kano River Project*. Kumarian Press.

Jackson, C. (1993). Doing what comes naturally? Women and environment in development. *World Development*, *21*, 1947-1963.

Jiggins, J. (1988). Problems of understanding and communications at the interface of knowledge systems. En S. Poats , M Schmink y A. Spring (eds.). *Gender issues in farming systems research and extension* (49-61). Westview Press.

Lambert. H. E. (1947a). Land tenure among the Akamba: part I. *African Studies*, *6*, 131-147.

Lambert, H. E. (1947b). Land tenure among the Akamba: part 11. *African Studies*, *6*, 157-175.

Lastarria-Cornhiel, S. (1995). Impact of privatization on gender and property rights in Africa [ponencia *Gender and Property Rights International E-mail Conference*, International Food Policy Research Institute, Washington D.C., mayo-diciembre].

Leach, M. (1992). Women's crops in women's spaces: gender relations in Mende rice farming. En E. Croll y D. Parkin (eds.). *Bush base forest farm: culture, environment, and development* (76-96). Routledge.

Leach, M. (1994). *Rainforest retarions: gender and resource use among the Mende of Gola, Sierra Leone*. Smithsonian Institution Press.

McLain, R. (1992). *Recommendation for a new Malian forest code: observations from the Land Tenure Center's study of land and tree tenure in Mali's Fifth Region*. Land Tenure Center, University of Wisconsin, University of Wisconsin Press,

Mohanty, C. (1991). Under western eyes: feminist scholarship and colonial discourses. En C. Mohanty, A. Russo y L. Torres (eds.). *Third world women and the politics of feminism* (51-81). Indiana University Press.

Moore, H. (1988). *Feminism and anthropology*. Polity Press.

Moore, D. (1993). Contesting terrain in Zimbabwe's eastern highlands: political ecology, ethnography, and peasant resource struggles. *Economic Geography*, *69*, 380-401.

Okoth-Ogendo, H. W. O. (1991). *Tenants of the crown: evolution of agrarian law and institutions in Kenya*. ACTS Press.

Pala-Okeyo, A. (1980). Daughters of the lakes and rivers: colonization and the land rights of Luo women. En M. Etienne y E. Leacock (eds.). *Women and colonization: anthropological perspectives* (186 - 213). Westview Press.

Palmer, I. (1985). *The impact of male outmigration on women in farming*. Kumarian Press.

Peters, P. (1986). "Inter- and intra-household dimensions of community livestock and water management in Botswana. En J. L. Moock (ed.). *Understanding Africa's rural households*. Westview Press.

Peters, P. (1994). *Dividing the commons: politics, policy, and culture in Botswana*. University of Virginia Press.

Posey, D. (1985). Indigenous management of tropical forest ecosystems: the case of the Kayapo Indians of the Brazilian Amazon. *Agroforestry Systems*, *3*, 139-158.

Riddell, J. (1987). Land tenure and agroforestry: a regional overview. En J. B. Raintree (ed.). *Land, trees, and tenure: proceedings of an international workshop on tenure issues in agroforestry, May 1985*. International Council for Research in Agroforestry / University of Wisconsin.

Rocheleau, D. (1988a). Women, trees and tenure: implications for agroforestry. En L. Fortmann y J. Bruce (eds.). *Whose trees? Proprietary dimensions of forestry*. Westview Press.

Rocheleau, D. (1988b). Gender, resource management and the rural landscape: implications for agroforestry and farming systems research. En S. Poats, M. Schmink y A. Spring (eds.). *Gender issues in farming systems research and extension* (149-171). Westview Press.

Rocheleau, D. (1991). Gender, ecology and the science of survival: stories and lessons from Kenya. *Agriculture and Human Values*, *8*, 156-165.

Rocheleau, D. 1995. Gender and biodiversity: a feminist political ecology perspective. *IDS Bulletirz*, *26*, 9-16.

Rocheleau, D. y L. Ross. (1995). Trees as tools, trees as text: struggles over resources in Zambrana-Chacuey, Dominican Republic. *Antipode*, *27*, 407-428.

Rocheleau, D., K. Schofield y N. J. Mbuthi. (1994b). People, property, poverty and parks: a story of men, women, water and trees at Pwani. En B. Thomas-Slayter y D. Rocheleau (eds.). *Environment and development in Kenya: a grassroots perspective*. Lynne Reiner.

Rocheleau, D., P. Steinberg y P. Benjamin. (1994a). A hundred years of crisis? Environment and development narratives in Ukambani, Kenya. *Working Papers in African Studies, No. 189*. African Studies Center, Boston University, Boston.

Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter y E. Wangari. (1996). *Feminist political ecology: global perspectives and local experiences*. Routledge.

Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter y D. Edmunds. (1995). Gendered resource mapping. *Cultural Survival Quarterly*, *18*, 62-68.

Sarin, M. (1996). Case studies of gender, class and ethnic conflicts in joint forest management [ponencia en conferencia virtual *Conflict Resolution and Community Forestry*, FAO Community Forestry Program, Roma].

Scher, C. (1988). *Pilot survey of adopted agroforestry practices in the Care Agroforestry Extension Project*. ICRAF-CARE Project Report No. 6. ICRAF.

Scherr. C. (1990). The diagnosis and design approach to agroforestry project planning and implementation: examples from Western Kenya. En W. Budd (ed.). *Planning for agroforestry* (132-160). Elsevier.

Scherr, S. (1994). Agroforestry. *National Geographic Research and Exploration*, *10*, 144-157.

Schroeder, R. (1993). Shady practices: gender and the political ecology of resource stabilization in Gambian garden/orchards. *Economic Geography*, *69*(4), 349-365.

Scott, J. (1976). *The moral economy of the peasant*. Yale University Press.

Slocum, R., L. Wichart, D. Rocheleau y B. Thomas-Slayter. (1995). *Power, process and participation: tools for change*. Intermediate Technology Press.

Talle, A. (1988). *Women at a loss: changes in Maasai pastoralism and their effects on gender relations*. University of Stockholm Press.

Thomas-Slayter, B. (1992). Implementing effective local management of natural resources: new roles for NGOs in Africa. *Human Organization*, *61*, 136-143.

Thomas-Slayter, B. y D. Rocheleau. (1995a). *Gender, environment and development in Kenya: a grassroots perspective*. Lynne Reiner.

Thomas-Slayter, B. y D. Rocheleau. (1995b). Research frontiers at the nexup of gender, environment, and development: linking household, community, and ecosystem. En R. S. Gallin, A. Ferguson y J. Harper (eds.). *The women and development annual* (79-118). Routledge.

Tibaijuka, A. K. (1984). *An economic analysis of smallholder banana-coffee farms in the Kagera region, Tanzania: causes of decline in productivity and strategies for revitalization* [tesis de doctorado, Swedish University of Agricultural Sciences].

Wangari, E. (1991). *Effects of land registration on small-scale farming in Kenya: the case of Mbeere in Embu district* [tesis de doctorado Department of Economics, The New School for Social Research].

Watts, M. (1993). Development I: Power, knowledge, discursive practices. *Progress in Human Geography*, *17*(2), 252-272.

Zwart, G. (1990). *Women's issues in agriculture* [ensayo para el Banco Mundial y la Zimbabwe Agricultural Sector Mission, Washington, DC].

27. ¿Disciplinado a las mujeres? El arroz, la mecanización y la evolución de ls elaciones de género mandika en Senegambia[1]

Judith Carney y Michael Watts



1 Publicado originalmente en: Judith Carney y Michael Watts, 2001, "Disciplining women? Rice, mechanization, and the evolution of Mandinka gender relations in Senegambia", *Signs*, 16(4), 651-681. *N. de T.: El presente texto constituye una traducción fiel y exacta de su original. Se informa que el formato de las citas en el cuerpo del trabajo y la lista de referencias bibliográficas han sido adaptadas estrictamente al formato de citación APA. Estas modificaciones responden únicamente a criterios de normalización académica y técnica, sin que se haya alterado, adicionado o suprimido el contenido de la obra original.

La intensificación de la agricultura es tal vez el proceso más importante, desde el punto de vista ecológico y económico, que tiene lugar en África en la actualidad;
sin embargo, está mal descrito y comprendido.

Jane Guyer.

La investigación sobre el papel de las mujeres en el proceso de producción… debe incluir un relato de las relaciones de autoridad familiar según las cuales se organiza este trabajo, y las relaciones de propiedad que esta estructura de autoridad
genera y mantiene.

Ursula Sharma.

Los autores desean agradecer el apoyo del Center for Research on Economic Development, Universidad de Michigan, Ann Arbor, que financió parcialmente la investigación de campo de 1983-1984 en Gambia; del Institute of International Studies de la Universidad de California, Berkeley, y de la Fundación Ford para la investigación de Watts en 1985; y del Institute for Development Anthropology, que proporcionó un apoyo de seguimiento fundamental para el trabajo de campo de Carey en 1987. Las siguientes personas también proporcionaron una ayuda invaluable durante el trabajo en Gambia y en la preparación de este ensayo: Oussainou Baldeh, Sara Berry, Michael Burawoy, Chris Elias, David Gamble, Gillian Hart, Lucy Jarosz, Ivan Karp, Peter Little, Julia Morris, Pauline Peters, Modi Sanneh y John Sutter.

En su libro clave, *Women's role in economic development* (*El papel de la mujer en el desarrollo económico*), Ester Boserup hizo hincapié en las formas fundamentales en que el trabajo de las mujeres variaba de una cultura a otra. Basándose en gran medida en materiales procedentes de la agricultura africana, fue la primera en señalar la prevalencia en África de sistemas agrícolas femeninos en los que "la producción alimentaria es encabezada por mujeres con escasa ayuda de los hombres" (Boserup, 1976, p. 16). Para Boserup, la centralidad de la mujer en los sistemas africanos de producción

agraria y de producción de alimentos en una cultura caracterizada por una rígida división sexual del trabajo se relacionaba de manera directa con la densidad demográfica, los sistemas de tenencia de la tierra y la tecnología. Boserup también se preocupó por identificar las relaciones entre la agricultura femenina y la intensificación agrícola. Impulsadas por el crecimiento demográfico y una reducción asociada a los períodos de barbecho, las trayectorias del cambio agrario en la agricultura africana solían asociarse con la retirada de las mujeres de la producción. En los sistemas de cultivo anuales, por ejemplo, disminuía el número de mujeres involucradas activamente en la agricultura, aunque el número de horas trabajadas por las mujeres que seguían involucradas en la producción en granjas podía permanecer estable o incluso aumentar en términos absolutos. Cualesquiera que sean las limitaciones de la fórmula inicial de Boserup, su enfoque sobre la forma y el carácter de la intensificación agrícola afecta al núcleo del cambio ecológico y económico contemporáneo en la agricultura africana (Cf. Folbre, 1986; Guyer, 1986; H. Moore, 1988; Lele y Stone, 1989).

En este trabajo detallamos un proceso de 150 años de cambio agrario en una sociedad campesina que ha experimentado repetidos esfuerzos por intensificar el proceso laboral. Nuestro objetivo es asumir la problemática tarea de "rastrear cambios sutiles y acumulativos en una esfera tan íntima como las relaciones domésticas" (Guyer, 1988: 155). A nuestro juicio, la intensificación agraria consiste en conseguir que la gente trabaje más, un proceso que es social y de género (conseguir que *algunas* personas trabajen más que otras) y que es típicamente coercitivo y conflictivo. La forma en que se negocia y se lucha por la intensificación del trabajo, es decir, cómo se desencadena la intensificación agrícola mediante las reglas determinadas de normas de acceso y control de los recursos, configura de modo fundamental el carácter y la trayectoria del propio cambio agrario (Guyer y Peters, 1987; también, Carney, 1989).

El estudio de caso se basa en la historia social de los arroceros mandinka en Senegambia y en los repetidos esfuerzos gubernamentales para intensificar la producción de arroz en la cuenca del río Gambia durante el último medio siglo. La cuestión central de este proyecto era: ¿Quién

debía trabajar y en qué condiciones? Pero, como ha observado Úrsula Sharma (1986), el trabajo es siempre inseparable de cuestiones más amplias de autoridad doméstica y propiedad. En consecuencia, sostenemos que una sucesión de intervenciones estatales diseñadas para aumentar la producción de arroz, primero mediante la expansión de la producción del doble cultivo bajo el riego mecanizado, animó las luchas intrafamiliares por el acceso y el control de la tierra y el trabajo. Estas luchas, libradas en el terreno doméstico, sólo pueden entenderse en relación con la arraigada división sexual del trabajo por cultivos en la sociedad mandinka; en resumen, el sistema agrícola femenino de Boserup. Pero este no era tanto un sistema tradicional como un producto de la historia moderna, es decir, de la creciente mercantilización de la producción campesina a mediados del siglo XIX. Los esfuerzos por intensificar la producción de arroz por medios tradicionales (pantanos) o innovadores (regadío) naufragaron en los arrecifes de los roles de género en el hogar y en la propiedad. Sin embargo, estos roles de género no han sido ni mucho menos estáticos; las intervenciones estatales iniciaron luchas y conflictos sobre las relaciones consuetudinarias en la práctica agrícola y social mandinka, con consecuencias ambiguas e incluso contradictorias para las mujeres.

En este artículo, describimos, en primer lugar, la construcción del sistema agrícola femenino en el siglo xix como parte de un proceso más amplio de respuesta a la necesidad de intensificar la producción de alimentos en general y la de arroz en particular. Luego, trazamos en detalle la serie de estrategias que se emplearon para reducir la dependencia en el arroz importado y, después de la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos por implantar el doble cultivo mecanizado en condiciones de regadío. El arroz de regadío impuso un cultivo temporal (de secano) sin precedentes históricos o consuetudinarios en la región. El trabajo de las mujeres no fue desplazado abruptamente por la innovación tecnológica, sino que pasó a formar parte de una compleja serie de conflictos y renegociaciones locales sobre las condiciones de trabajo y el proceso laboral, lo que Guyer (1988: 171) denomina "el proceso continuo de negociación sobre la organización de las transferencias y responsabilidades interpersonales en condiciones cambiantes".

Inventar la tradición: el auge del cacahuate, las crisis alimentarias y el trabajo de las mujeres en el siglo xix

Gambia, una franja de tierra de apenas treinta kilómetros de ancho dividida por el río Gambia, se considera una economía de exportación africana arquetípica, aunque liliputiense, dependiente en su totalidad de un producto agrícola: el cacahuate. Pero la historia reciente de Gambia también ha estado marcada radicalmente por el sistema de producción de alimentos que sustentó la expansión de las exportaciones y por las crisis alimentarias periódicas que acompañaron el meteórico aumento de la producción de cacahuate en el siglo xix. La exportación de Gambia se liga de manera fundamental a la historia del arroz, un alimento antiguo básico y culturalmente elaborado, vinculado a las mujeres, sus cultivadoras tradicionales.

Previo a la presencia europea en lo que ahora es Gambia, la especie africana del arroz (*Oryza glaberrima*) se cultivaba como arroz de secano en tierras altas (*tendako*) y, de modo más extenso, como arroz húmedo o arroz de arrozal en pantanos de marea salina y de agua dulce (*facaro* y *wamifaro*), en llanuras aluviales que se inundan periódicamente (*leofaro*) y en depresiones ribereñas (*bantafaro*) (Carney, 1984; Dey, 1980). La tecnología autóctona del cultivo del arroz, que incluía complejos sistemas de diques y encharcamientos, gestión del agua y de la sal, elaboradas parcelas, trasplantes e incluso dobles cultivos, impresionó profundamente a los viajeros —exploradores musulmanes y europeos de los siglos xvi al xviii— (Cf. F. Moore, 1738; Adanson, 1759; Jobson, 1904; Lewicki, 1974). La producción de arroz en la cuenca del río Gambia era dominio principal de las mandinkas,[2] quienes controlaban el arroz que cultivaban. Francis Moore, un agente de la Compañía Real Africana en la década de 1730, proporcionó un relato temprano de la división sexual del trabajo dentro

2 Este ensayo se basa en los mandinkas, la etnia dominante de Gambia, que comprende las cuatro décimas partes de la población. El sistema agrícola mandinka ha sido bien documentado por la ubicación de los mandinkas a lo largo del río Gambia y por su involucramiento en las primeras etapas en el comercio del cacahuate. Las mujeres de las etnias jola y serrahuli también tienen una tradición del cultivo del arroz: los jola cultivan arroz en depresiones ribereñas lejos de la parte baja del río Gambia, que es salado todo el año; y las serrahuli cultivan el cereal a lo largo del río y sus afluentes en las zonas ribereñas centrales y superiores como un cultivo secundario al cacahuate, cuyo producto se apropian de forma individual.

de los sistemas agrícolas de Gambia, donde observó: "Los hombres trabajan la tierra del maíz [campos de mijo y sorgo] y las mujeres y las niñas la tierra del arroz" (Moore, 1738: 127). Ciento cincuenta años antes, el viajero portugués Donelha había observado cómo las mujeres comerciaban el arroz en puertos a lo largo del río Gambia, y Moore, en el siglo xviii, destacaba la importancia de los derechos de las mujeres sobre los cultivos, señalando que el arroz era "de su propiedad" y que se comerciaba después de que hubieran almacenado una cantidad suficiente para el uso familiar (Donelha, 1977: 149; F. Moore, 1738: 7). De hecho, a mediados del siglo xviii se había desarrollado un sólido comercio basado en la producción de arroz de las mujeres. Los franceses compraban grandes cantidades de arroz con cáscara en los puntos de comercio situados río abajo, lo que llevó al comandante de la provincia de Senegambia a comentar en la década de 1770 que "aquí se podría producir tanto arroz como en las provincias de Carolina y Georgia" (Rhodes House (n.d.). A medida que avanzaba la adquisición británica en la cuenca del río Gambia en la primera parte del siglo xix, se empezó a considerar seriamente la exportación de arroz como medio para diversificar una base de exportación limitada dominada por los productos extractivos forestales y animales (cera de abeja, goma, teca, pieles y marfil). El excedente de las mujeres en 1828 alentó las exportaciones de arroz a las economías de las plantaciones de las Indias Occidentales, y en 1834 se fomentó activamente "la nueva rama del comercio" distribuyendo arroces asiáticos productivos (*Oryza sativa*) a los africanos liberados.[3]

Cualquiera que hubiera sido la probabilidad de convertir los discontinuos territorios a lo largo de las zonas bajas del río Gambia en una economía de plantación de arroz siguiendo el modelo de Carolina del Sur, el incipiente modelo de exportación de arroz se vio en cualquier caso truncado por el explosivo desarrollo de la industria del cacahuate. Las empresas comerciales de Gran Bretaña y Francia, como Foster and Smith y Maurel and Prom, alentaron de manera activa la producción del cacahuate en la década de 1830, sobre todo a lo largo de la orilla del norte del río, y las exportaciones comenzaron en serio a partir de 1843. Este crecimiento en la producción de

3 Las exportaciones de arroz llegaban al 5% de los ingresos totales de exportación en 1828 (Public Records Office, Londres, Colonial Office 87/10, Rendall to Hay, 1834; cf. David Gamble, *Contributions to a Socio-Economic Survey of The Gambia* (Londres: Her Majesty's Stationery Office, 1949).

cacahuate representó un punto de inflexión en la organización y el reclutamiento de mano de obra doméstica mandinka. Las características del auge del cacahuate pueden rastrearse tanto en el uso de mano de obra agrícola servil por parte de los productores domésticos de Gambia como en la disponibilidad de pelotones de emigrantes estacionales de territorios vecinos, o "agricultores extranjeros" (*samalaalu*), que con frecuencia trabajaban junto a los esclavos de sus anfitriones de Gambia (Cf. Swindell, 1981; Robertson, 1987). Los agricultores extranjeros, que producían "más de la mitad del cacahuate exportado" (Cf. Colonial Office, 1849; Colonial Office, 1851; Swindell, 1980). Fueron en gran parte responsables del aumento de 400% de las exportaciones entre 1843 y 1857. Pero la expansión del cultivo del cacahuate se produjo a expensas de las tierras altas dedicadas a la producción de mijo y sorgo. Salvo por un ominoso revés en 1857, cuando la escasez de alimentos obligó a importar 6 099 libras de arroz.[4] La producción de cacahuate y la emigración de la mano de obra se vieron favorecidas por la intensificación de la competencia mercantil y los favorables precios de exportación hasta la crisis económica mundial de principios de la década de 1880.

En resumen, la rápida proliferación de la producción de mercancías en el siglo xix transformó rápido la cuenca del río Gambia antes del establecimiento formal del dominio colonial en 1889. Esta transformación tuvo consecuencias directas en los roles de género, la autonomía de las mujeres y la división sexual del trabajo; estos procesos fueron más marcados entre el grupo étnico dominante en el cultivo del arroz, los mandinkas. (Carney 1986; Watts en prensa 1) El comercio de exportación de arroz casi desapareció, mientras la demanda de arroz como alimento básico aumentó de forma drástica después de 1843. En la década de 1850, el régimen de productos básicos de Gambia dependía en su totalidad de la disponibilidad de arroz importado. Con la mano de obra masculina nacional asignada a la producción de cacahuate y un gran número de agricultores extranjeros que recibían alimentos a cambio de su trabajo, la demanda de cereales de subsistencia aumentó al mismo tiempo que la producción de mijo y sorgo de los hombres de las tierras altas se vio disminuida de forma decisiva.

4 "Una escasez alimentaria alarmante ha golpeado este año en considerables partes del río […] a causa de su abandono de los campos de arroz y maíz" (Public Record Office, 87/64, 1857).

La llegada de los agricultores forasteros al inicio de la estación de lluvias aumentó la demanda de las reservas de cereales del hogar justo durante el periodo en que las reservas de alimentos estaban a punto de agotarse (la llamada estación del hambre). En resumen, se impusieron nuevas exigencias a los pantanos arroceros de las tierras bajas y, por tanto, al trabajo de las mujeres, para alimentar al ahora ampliado hogar. El crecimiento de la demanda interna de arroz ya era visible en la década de 1840, cuando los agricultores mandinkas, que "no tenían suficiente para comer", aumentaron la superficie de cultivo de arroz mediante la tala de manglares para la producción (National Archives of The Gambia, 1943: 4). La hambruna de 1857, en particular, puso de relieve de forma dramática hasta qué punto la producción de alimentos se vio disminuida por el auge del cacahuate y las mujeres se vieron afectadas por los cambios de los patrones agrícolas. El gobernador D'Arcy observó tras la hambruna que, en el corazón de los distritos de cultivo del cacahuate, los agricultores mandinkas varones "ya no dedicaban esfuerzos a la producción de alimentos [...] dejando esta tarea exclusivamente a las mujeres, mientras ellos se dedicaban al cacahuate en serio" (National Archives of the Gambia, 1861).

La creciente dependencia del arroz como alimento básico facilitó a mediados del siglo XIX un rápido reajuste de la división sexual del trabajo mandinka, que pasó de los roles de género específicos por tareas a roles específicos por cultivos. Durante la década de 1850 y antes, hombres y mujeres trabajaban lado a lado tanto en las zonas de cultivo altas como en las bajas. Las mujeres alternaban la producción de hortalizas y *fonio* (*Digitaria exilis)* con los cultivos de cereales de los hombres en tierras altas.[5] La producción del arroz era principalmente el dominio de las mujeres, no obstante, los hombres eran responsables de tareas específicas, sobre todo de la preparación de los pantanos antes de trasplantar. Sin embargo, a medida que el cultivo del cacahuate se extendía por las tierras altas

5 El fonio, conocido como el "arroz hambriento", fue uno de los primeros cereales en ser cosechado durante la temporada agrícola cuando los suministros de comida eran más bajos; véase también Peter Weil, "Agrarian Production, Intensification and Underdevelopment: Mandinka Women of The Gambia in Time Perspective", en *Proceedings of the Title XII Conference on Women in Development*, ed. Charles Curtis (Newark: University of Delaware, 1982), 37-77.

y era monopolizado por los hombres mandinkas, el trabajo agrícola de hombres y mujeres se separaba cada vez más específicamente entre las zonas altas y bajas, lo cual dio lugar a una división sexual del trabajo por cultivos mucho más rígida. El arroz pasó a ser un trabajo de mujeres y, a diferencia del cacahuate, en gran medida no se vendía.

Las mujeres eran incapaces de soportar la carga de una mayor necesidad de subsistencia para los hogares, y las comunidades productoras de cacahuate pasaron a depender gradualmente de la compra de alimentos, en algunos casos cultivados por las comunidades jola de los distritos de la ribera del sur, al otro lado de la frontera, en territorio francés.[6] Pero el auge temprano de la especialización en Senegambia no pudo seguir el ritmo del meteórico crecimiento de la demanda de alimentos básicos aumentado por una dinámica economía del cacahuate. La carga adicional de los agricultores extranjeros en el abastecimiento de alimento de los hogares —estimado en una tonelada por cada once inmigrantes— y el menor énfasis en los cultivos alimentarios de las tierras altas aumentaron en alto grado la demanda interna de alimentos básicos, un hambre que a partir de 1840 se satisfizo con arroz importado (*Proceedings of the Third Conference of Protectorate Chiefs*, 1946).

Para finales de la década de 1860, las importaciones de arroz se habían multiplicado por diez con respecto a la década anterior, hasta alcanzar 2 100 toneladas. Esta creciente dependencia de las importaciones fue vista por los administradores británicos como una molestia costosa, pero necesaria para mantener el flujo de agricultores extranjeros frente a la firme competencia senegalense y para compensar la rápida desaparición de la autosuficiencia doméstica en la ribera del norte y los distritos de la parte alta del río. El comercio de importación de arroz estaba controlado por casas comerciales

6 El comercio del arroz en comunidades Jola ya estaba moribundo durante las últimas décadas del siglo diecinueve debido a las prácticas de casas comerciantes francesas y británicas que exprimían las redes comerciales Jola y debido al advenimiento del dominio colonial que reorientó los cultivos lucrativos hacia el maní para recaudar dinero para impuestos per cápita; véase Olga Linares "Cash Crops and Gender Constructs: The Jola of Senegal," *Ethnology* 24, no. 2 (1985): 83-93, esp. 84. Véase también Abdullahi Jeng, "An Economic History of The Gambian Groundnut Industry, 1830-1924: The Evolution of an Export Economy" (tesis de doctorado, University of Birmingham, 1978). Véanse también Carney, "The Social History of Gambian Rice Production"; y Watts, *Manufacturing Dissent*.

francesas y británicas, cuyos agentes distribuían el arroz a crédito en sus almacenes junto al muelle.[7] Los compradores locales de cacahuates solían comprar todo el producto disponible a los campesinos para poder adelantar las semillas de la temporada siguiente; proporcionaban por adelantado telas, bienes comerciales y arroz para "atar" a los productores a las ventas posteriores de cacahuates y para proporcionarles inversiones lucrativas a corto plazo. Para 1860, el gobernador D'Arcy consideraba que el enorme sistema de anticipos mercantiles era "pernicioso", algo que engendraba "opiniones bajas e inmorales y temeridad" (Public Record Office, 1860). Treinta años más tarde, irónicamente, fue el propio Estado colonial, impulsado por los daños generalizados en las cosechas, el que financió una red masiva de créditos para semillas y arroz para los agricultores.

El Estado colonial entregó semillas a los campesinos por primera vez en 1894, y con regularidad a partir de 1896-97, junto con una reducción de los impuestos. La grave sequía de 1901 obligó al Estado a suministrar 4 000 sacos de arroz a crédito precisamente porque las empresas mercantiles pusieron fin a sus créditos de subsistencia. El alivio de la deuda lubricó la maquinaria de exportación de cacahuates porque tanto el Gobierno como las compañías mercantiles dependían directamente de los cacahuates para sus ingresos y para la demanda interna que generaban. No obstante, más de la mitad de la cosecha de los cacahuates era cultivada por agricultores extranjeros, para quienes la alimentación era el eje central de su contrato de trabajo con los campesinos anfitriones. En resumen, a menos que se dispusiera de alimentos para captar mano de obra migrante, el castillo de naipes colonial se derrumbaría.

Cuando se estableció el dominio colonial en 1889, la economía política de Gambia era estructuralmente inestable. Las importaciones de arroz habían crecido de manera significativa, entre otras cosas, porque los

7 La procedencia de las importaciones de arroz nunca se mantuvo estable a lo largo del periodo entre 1835 hasta la Independencia (1965); en la década de 1840, una cantidad considerable venía de África Occidental y desde entonces de Francia, Alemania y Gran Bretaña. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, dominaba la oferta de Estados Unidos; fue desbancada por Francia en la década de 1920 y por India y Birmania en la década de 1930. En el periodo de posguerra predominó el arroz asiático y estadounidense. Véase Watts, *Manufacturing Dissent*.

créditos arroceros eran parte integral del sustento de lo que, en 1915, era un ejército de al menos treinta mil agricultores extranjeros.[8] La temeraria afirmación del gobernador McDonnell en 1849 de que, a pesar del cultivo excesivo de cacahuates "no habría peligro de que los nativos [...] padecieran hambrunas" (Public Record Office, 1849), fue bastante desacertada si se tienen en cuenta las crisis alimentarias de 1857, 1876, 1894 y 1901 y, de manera más general, el acrecentamiento del periodo de hambre en los meses previos a la nueva cosecha. La creciente inseguridad alimentaria, unida a la proliferación de la deuda campesina, hizo necesarias una serie de intervenciones para ampliar la producción nacional de alimentos. En particular, la atención se centró en los pantanos y en la producción de arroz por parte de las mujeres. El primer esfuerzo del Gobierno colonial por sustituir las importaciones, los programas de arroz de pantano, desarrollados entre la década de los veinte y la de los cincuenta, constituyó un segundo hito importante en la construcción social de los roles de género y las relaciones conyugales de los mandinkas. Estas sucesivas intervenciones en la producción doméstica del arroz alteraron profundamente las funciones productivas y la autonomía económica de los hombres, los derechos de propiedad doméstica y las relaciones conyugales en el hogar.

El desarrollo del arroz de pantano y los límites del trabajo de las mujeres

En las primeras décadas de la llegada de la colonia, los administradores recorrieron el país para documentar las prácticas de cultivo de las mujeres, las zonas agroecológicas cultivadas y las condiciones pluviales e hidrológicas que regulaban la agricultura y la producción. Sus informes proclamaban con entusiasmo el potencial de Gambia como un "cuenco arrocero" y justificaban los programas de sustitución de importaciones desarrollados en los pantanos mareales a lo largo de la década de 1950 (National Archives of The Gambia,

8 En el transcurso de la década de 1920, e.g., los agricultores extranjeros constituyeron en promedio un 60% de la población de residentes permanentes en la División Río Arriba, que representan alrededor de £18,000 en alimentos básicos por temporada. Véanse Rhodes House Micr. Afr. 485 Confidential Diary, Travelling Commissioner, junio 1925, y Upper River Division Annual Report 1929; véase también Watts, *Manufacturing Dissent*.

1893–1917). El entusiasmo por el desarrollo del arroz de los pantanos se vio alimentado por la crisis fiscal del Estado, provocada por la disminución de las exportaciones de cacahuate y la correspondiente necesidad de reducir los gastos en arroz elaborado, un dilema expuesto con admirable claridad en un informe publicado en 1923: "Nuestra posición en la industria del cacahuate solo puede mantenerse […] descubriendo medios que permitan reducir el costo de la producción […] disminuyendo el coste de la mano de obra […] haciendo que la colonia dependa menos de los suministros importados de alimentos" (National Archives of The Gambia, 1923–1936). La mejora de la producción de arroz en los pantanos mareales cercanos a los asentamientos mandinkas de las tierras bajas proporcionó un medio barato en particular, convincente para reducir la dependencia de las importaciones. A partir de la década de los veinte, se introdujeron arroces asiáticos mejorados para impulsar la producción en la llanura aluvial central de Gambia, donde los ricos suelos aluviales, las inundaciones provocadas por las mareas y las condiciones estacionales de agua dulce favorecían grandes cosechas de arroz. Los programas estatales financiaron la tala de manglares, la construcción de autopistas y pasarelas para mejorar el acceso a los pantanos de aguas profundas, la distribución de semillas tolerantes a la sal y la aplicación de nuevos métodos de preparación del lecho de siembra. Como resultado de estos esfuerzos, el cultivo se expandió de forma considerable a mediados de la década de los cincuenta; la superficie plantada se duplicó hasta 49 000 acres, lo cual redujo las importaciones trabajadas en 80% hasta 2 000 toneladas (Carney, 1986: 208).

A pesar del aumento de la producción, los funcionarios coloniales reconocieron que un mayor incremento dependía de la capacidad de transformar la división sexual del trabajo mandinka, a lo que el gobernador Blood se refirió de forma pintoresca en 1942 como "el problema antropológico" (National Archives of The Gambia, 1942). Las mujeres ya soportaban al límite la carga de la producción de arroz, y una mayor intensificación de la producción de arroz dependía cada vez más de "hasta qué punto se podía persuadir a la población masculina para que participara activamente en el cultivo del arroz" (National Archives of The Gambia, 1943b). La persuasión en este caso consistió en importar cultivadores de Sierra Leona para educar a sus

homólogos mandinkas en el arte del cultivo del arroz de pantano —demostrando técnicas rudimentarias de irrigación basadas en ruedas hidráulicas y ascensores para el cultivo en temporada de sequía, subrayando además, el potencial para el desarrollo del sistema de pantano mareal a lo largo de la planicie fluvial del río medio (*bafaro*), que tenía un ciclo de cultivo complementario al del cacahuate— (cf. Hardcastle, 1961; National Archives of The Gambia, 1929; Carney, 1986). Pero en lugar de impulsar el cultivo del arroz y elevar su "estatus de un cultivo femenino al de un emprendimiento familiar" (Roddan, 1943), los proyectos gubernamentales de arroz de pantano no consiguieron transformar los modelos de trabajo de la agricultura mandinka. Los mecanismos para obligar a los hombres a trabajar en los arrozales eran en particular escasos, y los hombres se resistieron con éxito a los esfuerzos para intensificar su trabajo alegando que el arroz era "un cultivo de mujeres".

La carga de la que los hombres podían desprenderse en la producción de alimentos fue depositada en los hombros de sus mujeres, madres e hijas. El extraordinario estudio de Margaret Haswell, realizado a lo largo de treinta años en una comunidad que participó en el desarrollo del arroz de manglar, detalla los cambios sociales en la producción doméstica mandinka y, en concreto, en la asignación del trabajo a las mujeres. Entre 1949, en vísperas del programa del arroz de manglar y su regreso en 1962, Haswell observó que el tamaño medio de la parcela de arroz de pantano de marea cultivada por cada mujer trabajadora aumentó en tamaño de 1.0 a 1.19 acres, lo que supuso una expansión en toda la aldea de 168 a 263 acres. El mayor énfasis en el desarrollo de arroz de manglar frente a otras ecologías arroceras amplió el periodo de trabajo de las mujeres en los pantanos de 90 a 102 días (Haswell, 1953; 1963, 22-33). Además, la ubicación de las parcelas de manglar en los pantanos ribereños implicaba largos desplazamientos diarios, lo que ampliaba el número de horas al día que las mujeres dedicaban al cultivo del arroz y estaban ausentes de sus hijos pequeños (Weil, 1973). Los datos de Haswell también revelan crudamente que las mujeres se incorporan al cultivo del arroz a una edad más temprana, con un aumento significativo del trabajo de las menores de veinte años y de las niñas menores de diez (Haswell, 1963)

Además, los proyectos coloniales de desarrollo arrocero generaron conflictos en las relaciones conyugales de los mandinkas, sobre todo en lo que respecta a los esfuerzos de las mujeres por reafirmar sus derechos de cultivo y establecer reclamaciones legítimas sobre el arroz que producían. Las luchas sobre la propiedad y la disposición de las cosechas estaban arraigadas en la estructura social mandinka y en las relaciones domésticas que regulan el acceso a los recursos y su control. El hogar mandinka, un grupo de parentesco patrilineal, patrilocal y poligínico con una media de diecisiete integrantes, proporciona el contexto en el que tanto hombres como mujeres obtienen acceso a las tierras de cultivo. Sin embargo, la residencia en un hogar (*korda*) obliga a los miembros de la familia a cooperar en la producción para su uso e intercambio. A cambio del trabajo dedicado a la subsistencia del hogar, a los miembros de la familia se les asignan derechos sobre una parte de la propiedad territorial familiar. Los derechos de propiedad y las reivindicaciones laborales constituían entonces, como ahora, los ejes fundamentales de las relaciones de producción mandinka; sin embargo, estos ejes no solo conformaban la naturaleza del trabajo, sino que enmarcaban, y siguen enmarcando, la estructura social de las relaciones familiares patriarcales y la división del trabajo en función del género (Carney, 1988a; Dey, 1981; Sharma, 1980). La forma en que algunos derechos, en especial los relativos al trabajo y la tierra, se han naturalizado por la tradición se plasma en el contrato conyugal, "los términos en los que los esposos y las esposas intercambian bienes, ingresos y servicios, incluido el trabajo, en el hogar" (Whitehead, 1981: 88; Beneria y Roldán, 1987). Los proyectos de desarrollo arrocero del siglo XX, cuyo objetivo es ampliar la producción, han desafiado los términos del contrato conyugal, un desafío que ha sido defendido, resistido y negociado con consecuencias dispares para las mujeres y el crecimiento agrícola.

Los agricultores mandinkas reconocen derechos de propiedad tanto comunales como individuales. En ambos casos, el principio fundamental que confiere la propiedad es el desbroce de las tierras no cultivadas y no reclamadas. Si los miembros de la familia emprenden el desbroce de forma colectiva, la tierra se designa como *maruo* y, como tal, es inalienable del grupo residencial. Sin embargo, las mujeres y los hombres en lo individual

pueden obtener derechos de propiedad de la tierra mediante el desbroce con su propio trabajo (*kamanyango*). El *kamanyango*, que representa una proporción menor de la propiedad de la tierra, es importante sobre todo para las mujeres, para las que este derecho representa una autonomía parcial, el único medio de eludir la estructura patriarcal de control de propiedad familiar y, por ende, de transferir tierras a sus hijas.[9] La gran mayoría de las tierras de propiedad individual se han desbrozado históricamente en los pantanos de las tierras bajas y suelen dedicarse a la producción de arroz, que requiere mucha mano de obra.

El lenguaje de la propiedad de la tierra también se refiere de modo simultáneo a las relaciones laborales y a los derechos de cultivo sobre la tierra reclamada por el grupo de residencia del hogar. La nomenclatura mandinka distingue entre los campos empleados para la producción de cultivos alimentarios o de valor de uso, y las parcelas plantadas para cultivos comerciales o de intercambio. La tierra en la que trabajan los miembros de la familia para las necesidades colectivas de subsistencia se conoce por convención como campos domésticos, o *maruo*, y constituye la forma dominante de uso familiar de la tierra. Los cultivos producidos para el consumo doméstico caen bajo la jurisdicción del varón —jefe del hogar—, quien controla el almacenamiento, la distribución y las ganancias en caso de una venta. A cambio de la aportación de mano de obra *maruo*, el jefe del hogar confiere a los miembros de la familia derechos de usufructo sobre una pequeña parte de las tierras familiares. En la medida que el cultivador siga siendo un trabajador familiar residente y capacitado, se garantiza a perpetuidad el control sobre el uso de la parcela y los derechos de cultivo. Estos campos individuales dedicados a la producción para el intercambio también se denominan *kamanyango*. Los hombres suelen cultivar cacahuates en sus parcelas individuales; las mujeres, arroz para la venta. La titularidad del *kamanyango* es ideológicamente fundamental para la constitución y el funcionamiento

9 "Cuando naces, recibes tierra por parte de tu madre. Se vuelve tu tierra. También recibes tierra *maruo* [compuesto] de tu esposo; pero si te casas con un hombre que no tiene tierra para darte, la tierra de tu madre siempre está ahí para que te puedas sustentar. Ni el jefe de la aldea tiene el derecho de quitarte esa tierra" (Mariama Koita, mandinka entrevistada en *The Lost Harvest*, un documental fílmico producido por Sarah Hobson para la BBC, Londres, 1983).

del contrato conyugal. Los miembros de la familia son compensados por el trabajo que realizan en los campos familiares mediante la concesión de un control directo sobre los productos de sus parcelas individuales. Los cultivos del *kamanyango* suelen venderse, lo que proporciona a los miembros subordinados del hogar su principal acceso a los ingresos; para las mujeres en particular, los campos de arroz individuales proporcionan los medios para comprar alimentos complementarios y ropa para sus hijos.

Cuando los manglares se convirtieron en nuevas tierras arroceras a finales de la década de los cuarenta y a principios de los cincuenta, las mujeres intentaron hacer valer sus derechos de cultivo tradicionales reclamando una parte de producción de arroz. En resumen, las mujeres veían los pantanos recién desbrozados y mejorados como una oportunidad para reafirmar sus derechos *kamanyango*. Por el contrario, el aumento de la producción ofrecía a los hombres la posibilidad de reducir sus compras de arroz procesado y convertir una parte de las ganancias del cacahuete en renta disponible. Las mujeres se enfrentaron a una enérgica oposición de sus esposos en cuanto empezaron a desbrozar secciones de los pantanos recién abiertos, un proceso que confiere derechos de propiedad. Al transformar los pantanos de vegetación espesa y tierras bajas en parcelas individuales de *kamanyango*, las mujeres reafirmaron, de hecho, su derecho histórico a desvincular parte de su trabajo del control del hogar (Carney, 1986).

La oposición masculina a las reclamaciones de tierras por parte de las mujeres, reveló crudamente la forma en la que una configuración particular del patriarcado y la propiedad moldeaba las estrategias de acumulación doméstica. En un caso que llamó la atención de los administradores coloniales, los hombres establecieron las razones por las cuales las mujeres no debían poseer tierras, afirmando que "si las mujeres marcan la tierra y la dividen, se convertirá en 'propiedad de las mujeres', de modo que cuando el esposo muera o se divorcien de su mujer, no deben ser dueñas de la tierra" (Rahman, c. 1949). La amenaza que suponían las luchas de las mujeres para el sistema patriarcal de propiedad y trabajo disminuyó en la medida que los funcionarios coloniales, sensibles a las implicaciones del control individual de los cultivos por parte de las mujeres para la mano de obra migrante y las reservas de alimentos del hogar, determinaron que las nuevas tierras arroceras eran propiedad del hogar,

y no individual. La elasticidad del término *maruo* facilitó la invención de una nueva tradición en las zonas de arroceras de Gambia: las parcelas desarrolladas eran designadas *maruo* del hogar, una clasificación que disminuía el control femenino sobre los productos de su trabajo y permitía a los hombres jefes del hogar, apropiarse del excedente de producción generado por las mujeres (Carney, 1986: 307).

La era de los proyectos de arroz de pantano se cerró cuando los funcionarios coloniales aceptaron los límites impuestos por una división sexual del trabajo mandinka relativamente inflexible. Los proyectos habían ampliado de forma enorme la producción de arroz de pantano y la superficie cultivada, pero el esquivo objetivo de la autosuficiencia nacional en arroz dependía de la capacidad del Gobierno para atraer a los hombres a la producción de arroz. En última instancia, los esfuerzos coloniales por mejorar la producción nacional de arroz naufragaron en los arrecifes de las relaciones conyugales mandinkas. El programa de arroz de pantano puso de relieve los límites absolutos del tiempo para el trabajo de las mujeres y confirmó una observación anterior del gobernador Blood: "[El arroz] sigue siendo casi completamente un cultivo de mujeres y dudo que se puedan dedicar más horas de trabajo femenino a esta forma de cultivo" (National Archives of The Gambia. (1943b).

El periodo de posguerra: riego, conflictos territoriales y políticas de producción, 1947- presente

Mientras el Gobierno de Gambia seguía adelante con los proyectos de desarrollo del arroz de pantano, la Oficina Colonial en Londres se preparaba para un plan más ambicioso destinado a revolucionar la productividad del arroz mediante el riego mecanizado durante la temporada de sequía (doble-cultivo). El riego no era una idea nueva en Gambia. Identificada por primera vez por el gobernador Llewelyn en 1897, se debatió de forma repetida por parte de los asesores agrícolas metropolitanos a lo largo de la década de los veinte (National Archives of The Gambia, 1897; H. Parker (1901 y 1903); Dawe, 1921). Durante este periodo, la devoción colonial por la autofinanciación y la inundación de los mercados internacionales con arroz barato se opusieron a la consideración de la irriga-

ción como una innovación técnica para superar los límites de la disponibilidad de mano de obra.[10] Pero con la escasez local de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial, la crisis mundial alimentaria de 1947, y el empuje de dos grandes misiones agrícolas en África Occidental,[11] (Cowen, 1984; Baldwin, 1957; Clark y Hutchinson, 1948; Watts, en prensa 1), las reservas de la metrópoli se agotaron. En 1949, la Tesorería Británica, en colaboración con la Corporación de Desarrollo Colonial —Colonial Development Corporation (CDC)— puso en marcha un proyecto totalmente mecanizado de arroz de regadío a gran escala (10 800 acres) en Wallikunda, ubicado a lo largo de la zona central del río, libre de sal. Marcó la primera de tres fases de desarrollo del arroz de regadío de la posguerra, que tendría consecuencias muy contradictorias para el trabajo y los derechos de propiedad de las mandinkas.

Irrigación ostentosa: el plan de la CDC, 1949-1965

Presionada por la crisis de posguerra, la CDC se lanzó a un plan de producción iniciado casi sin tener en cuenta la hidrología y la ecología, y afectado por problemas técnicos y de diseño fundamentales. El sistema de riego en temporada de sequía resultó ser un fracaso estrepitoso. Desesperada, la CDC se dedicó a la producción de arroz en la estación húmeda, pero los objetivos de cultivo se vieron acosados por las malas condiciones de trabajo y el deterioro de las relaciones entre el personal del CDC y las aldeas locales. Reorganizados en 1952 como empresa conjunta con el Gobierno colonial y rebautizado como una granja arrocera de Gambia, el plan se convirtió en 1958 en la Estación de Investigación del Arroz Sapu del Gobierno.

Cada fase de la reorganización del esquema tuvo implicaciones directas y fue, en parte, una respuesta a las luchas de las mujeres por los derechos sobre la tierra y los cultivos y las obligaciones laborales. El Gobierno

10 En consecuencia, hubo una discusión considerable sobre la posibilidad de introducir un cultivo lucrativo irrigado (algodón) porque "no habría ninguna dificultad para elevar el agua del Gambia para su irrigación a un costo que los campesinos deben poder pagar" (National Archives of The Gambia, 2/961, carta de Frank Stockdale, Secretario de Estado para las Colonias, 5 de diciembre de 1929).

11 El cambio en las políticas fue producto del abandono de la autosuficiencia territorial en las colonias y la necesidad de crear fuentes no dolarizadas de suministros materiales.

colonial había redactado un contrato de arrendamiento de treinta años que concedía a la CDC el control de los 10 800 acres que pretendía explotar, y al hacerlo ignoró el detalle crucial de que gran parte de la tierra era de propiedad comunal. De hecho, al menos una cuarta parte de las tierras apropiadas eran cultivadas por mujeres locales (Carney, 1986, p. 199). Como compensación por la pérdida de producción de arroz y de las parcelas *kamanyango* apropiadas, se ofreció a las agricultoras trabajo remunerado, principalmente, para realizar operaciones no mecanizadas de gran intensidad de mano de obra, como la siembra, la escarda y la cosecha de arroz. Un año después de la firma del contrato, las agricultoras y sus esposos, enfadados, exigieron la devolución de las tierras arroceras. La CDC, que ya había comprometido 300.000 libras para el desarrollo de infraestructuras, no estaba en condiciones de ceder el control. Los hombres tomaron represalias irrumpiendo en los almacenes del proyecto y llevándose doscientas toneladas de arroz porque "los *tubabos* (blancos) les habían quitado sus tierras" (National Archives of The Gambia, 1954; Watts, en prensa 1). Estas "depredaciones góticas", como se refirió a los robos el director de la CDC, demostraron ser un golpe mortal al proyecto Wallikunda (National Archives of The Gambia, 1954).

Si el robo masculino socavó la visión original de la CDC, también lo hizo la resistencia femenina, en particular la reticencia de las mujeres a trabajar como asalariadas realizando las operaciones agrícolas no mecanizadas. En este caso, el diseño defectuoso de las infraestructuras resultó decisivo. La incapacidad de la administración para perfeccionar el sistema de riego dificultó el plan de cultivo en la temporada de sequía, y el mal diseño de los canales de drenaje impidió el control del agua durante la estación húmeda, lo que redujo la superficie útil. Algunas mujeres aprovecharon estas deficiencias técnicas para restablecer el cultivo de arroz en una parte de las tierras apropiadas y adaptar sus técnicas de producción, tradicionalmente flexibles, a los cambios en el drenaje provocados por el proyecto (Carney, 1987). En tanto el plan operó en una superficie reducida y fue confinada a la operación de temporada de lluvias, la administración se vio obligada a competir directamente con el trabajo de las familias cuando las mujeres estaban ocupadas con sus propios cultivos. La resistencia de las mujeres al trabajo asalariado y las oportunidades que crearon

en los espacios manufacturados por las fallas de diseño del esquema frustraron la capacidad de la administración para asegurar una fuerza laboral femenina disciplinada y regular. Incapaz de transformar las rutinas de trabajo locales, el proyecto necesitaba nuevos esquemas de trabajo para ser viable.

En 1952, la CDC, en colaboración con el Gobierno colonial, redujo la escala del proyecto a una extensión de doscientos acres y se enfocó en el problema de la mano de obra. Se introdujo la aparcería para evitar "sobrecargar el sistema con el costo de la mano de obra diaria", que "no puede competir contra la agricultura campesina" (National Archives of The Gambia, 1952: 22; National Archives of The Gambia, 1958). El sistema de aparcería, que asignaba dos sacos de arroz por cada cinco producidos, se diseñó para atraer tanto a hombres como a mujeres. Pero la dirección del proyecto sólo pudo atraer como aparceras a las mujeres, que por lo general carecían de tierras arroceras propias; "los hombres no tendrán nada que ver con el cultivo del arroz", comentó frustrado un director de granja (Gillespie, 1954: p. 3). Los acuerdos de aparcería resultaron, de hecho, insatisfactorios en su totalidad. Cuando la esperada afluencia masiva de mujeres cultivadoras no se materializó, la dirección solía opinar que "cada año, la granja debe contentarse con esperar a las mujeres [...] hasta que se liberen del trabajo en su propia siembra de arroz" (Watts, en prensa 1). Además, entre las que sí aparecían como aparceras, había problemas adicionales: las mujeres sistemáticamente declaraban menos de lo que cosechaban para apropiarse de una cantidad mayor de la producción.[12]

En 1958, cuando la CDC se retiró por completo y el proyecto cayó en manos de la Sapu Rice Research Station, se puso en práctica otro acuerdo laboral— el arrendamiento— para garantizar una cantidad fija de producción de arroz. Las tierras arrendadas se alquilaron a mujeres arroceras, a quienes se subvencionaron los servicios de arado con tractor. El arrendamiento mantuvo la producción, pero la gestión del proyecto no logró los excedentes de arroz previstos. Las mujeres se resistieron a las demandas de mano de obra pagando de menos o dejando

12 Si bien la aparcería mejoró la participación de las mujeres, también sentó las bases para los explosivos conflictos territoriales que surgirían tres décadas después con el proyecto Jahaly Pacharr. La urgencia por atraer aparceras se sobrepuso al interés de los administradores por el hecho de que las mujeres empleadas fueran las dueñas-sembradoras originales y sentaron el precedente bajo el cual los campesinos reclamaban las parcelas como propias en lo subsecuente.

de pagar los servicios de tractor, lo que dejó a los oficiales de gobierno en la posición incómoda de aceptar apropiaciones reducidas o pérdidas masivas. La apropiación del arroz por parte de la administración de las granjas de hecho disminuyó de alrededor de 1 000 libras de arroz con cáscara por acre bajo la aparcería en 1955 a 400 libras en régimen de arrendamiento en 1957, hasta solo 160 libras por acre para 1962 (MacCluskie, 1958: 14; Carney, 1986: 206; Watts, en prensa 2). Para la década de los sesenta, la negativa de las mujeres a pagarle al Gobierno por el servicio de tractor-arado llegó a la cantidad de 24.000 libras al año, y el servicio representó una pérdida anual significativa. En efecto, el proyecto fue capturado por arrendatarias altamente endeudadas.

Durante la independencia, el Gobierno de Gambia devolvió las tierras arroceras a los campesinos locales, pero los conflictos no se apaciguaron. Los repetidos intentos del proyecto de asegurarse una mano de obra fiable dejaron un legado de reivindicaciones territoriales entre las aldeas y los grupos familiares. El proyecto Wallikunda sembró semillas amargas en el suelo de la conyugalidad mandinka; a medida que las mujeres emprendieron el restablecimiento de sus derechos de cultivo *kamanyango*, los hombres proclamaron que las antiguas tierras de la CDC eran *maruo* (Dey, 1980). Sin embargo, desde la perspectiva del Estado, el desarrollo del regadío había fracasado de manera notable en su intento por revolucionar la productividad del arroz y producir excedentes comerciales. Las importaciones siguieron aumentando con rapidez, y Gambia llegó a la independencia con importaciones de arroz molido que superan las 10.000 toneladas.

Riego comunitario a pequeña escala: 1966-1979

La sustitución de las importaciones de arroz entró en una nueva fase en la década de los sesenta. Las crisis de producción y mano de obra se resolverían por medio del desarrollo de una producción de arroz mecanizada, a pequeña escala, con el agua completamente bajo control y la introducción del doble cultivo de variedades de arroz verde, y su revolución de alto rendimiento. Los perímetros de pequeña escala (10-20 hectáreas), se centraban en los distritos centrales y orientales de arroz de pantano, donde el río era de agua dulce todo el año y retomaron, en principio, las metas de la CDC: revolucionar los

medios técnicos de producción (introducir perímetros de irrigación, bombas pequeñas, motocultores y trilladoras) y, al mismo tiempo, mejorar la tierra y la productividad laboral al extender el trabajo del campo a la temporada seca ociosa para captar mano de obra masculina. La principal diferencia fue que los hogares controlaban directamente sus propios procesos laborales y conservaban los derechos de uso en las tierras recién niveladas que ayudaban a desbrozar. Entre 1966 y 1979, se nivelaron y recuperaron para el regadío 2 900 hectáreas de tierra, y se establecieron unas 311 asociaciones/perímetros de regadío, bajo tres auspicios institucionales distintos: la Misión Agrícola de Taiwán (1966-1975), el Banco Mundial (1973-1976) y la Misión de la República Popular de China (1975-1979), (Brautigam, 1984). Las organizaciones de las misiones y los perímetros no eran idénticas, pero en general dependían del suministro de agua, abono, bombas y combustible, semillas y motocultores a tasas altamente subsidiadas, para pagar a la hora de la cosecha.

Para 1980, menos de 40% (965 hectáreas) permanecían en producción, con solo 10% de doble cultivo. La recuperación de la deuda por parte del Gobierno de Gambia para créditos de producción fue menor a 20%, y las ventas de excedentes de arroz fueron insignificantes. En cierto sentido, el Estado fue capturado por los productores campesinos porque el control comunitario impedía la retirada de parcelas de hogares no productivos o de familias con baja intensidad de cultivo. El proyecto sí logró un objetivo perseguido por mucho tiempo: los hombres fueron gradualmente inducidos al cultivo del arroz. No obstante, el doble cultivo, tan crucial para la mercantilización del arroz, fue saboteado por la reacción de las mujeres ante la participación y toma de control de los hombres en los programas.

Los proyectos de riego se basaban en la capacidad de los recursos de mano de obra doméstica, tanto masculina como femenina, para cumplir con los calendarios anuales de cultivo. Sin embargo, las misiones de desarrollo, obsesionadas con los aspectos técnicos de riego, en gran medida ignoran las relaciones sociales de producción mandinka. Cada misión supuso que las familias campesinas se adherían a una función de utilidades conjuntas en las que hombres y mujeres trabajaban por igual en objetivos mutuos para el hogar, nunca cuestionando si compartirían la carga de trabajo o los beneficios financieros (Carney y Watts, 1990; Dey, 1981). Los hombres cabeza de

familia fueron movilizados para el desbroce de tierras y para el desarrollo del perímetro, y las misiones concedieron a los hombres el control sobre la propiedad irrigada. La limpia del terreno establecía derechos de propiedad que los hombres reclamaban de dos maneras: al designar las parcelas ya sea como propiedades individuales de *kamanyango* o como propiedades *maruo* del hogar. El significado de la clasificación territorial y el nombramiento de las parcelas como *maruo* fue evidente de inmediato. Los hombres buscaban evocar las obligaciones laborales tradicionales para las mujeres en los *maruo*, sin otorgarles derechos de cultivo de *kamanyango*. Para las mujeres, esta sutil reclasificación representó un quiebre fundamental en los derechos domésticos del contrato conyugal que regula y está arraigado en las relaciones de producción familiar.

Los conflictos centrales del hogar que presentaba el desarrollo de perímetros a pequeña escala se parecían a lo que Edward Thompson denomina disciplinas del trabajo y del tiempo, donde se describen circunstancias bastante distintas —en específico, si las mujeres trabajarían en las nuevas parcelas durante una o dos temporadas de cultivo— (Thompson, 1967). Las relaciones de producción mandinkas estaban ancladas históricamente en un sistema agrícola adaptado a un ciclo de cultivo de cinco meses; de hecho, no había precedente histórico alguno para los nuevos reclamos por el cultivo anual de las mujeres en tierras *maruo*. A medida que los hombres intentaron inducir a sus mujeres a trabajar en los perímetros para el doble cultivo, las mujeres se resistieron —a menudo con éxito—. Su rechazo hacia las nuevas exigencias de trabajo forzó una renegociación del contrato conyugal, una forma de política de la producción (Burawoy, 1985; Watts, en prensa 1), con consecuencias directas para el trabajo de las mujeres y para la capacidad de los programas para mercantilizar la producción de arroz. Las integrantes femeninas de la familia consintieron a brindar trabajo *maruo* para el cultivo en temporada seca a cambio de derechos de cultivo *kamanyango* durante la temporada de lluvias (a veces sembrando en la misma parcela de irrigación para una cosecha de arroz abonada por la lluvia) (Carney, 1986: 251). Los hombres también laboraban en los perímetros de irrigación durante la temporada seca, pero durante las lluvias se cambiaban a sus campos más lucrativos de cacahuate en las tierras altas. La manera en la que el trabajo agrícola en los proyectos de irrigación era mediado por las relaciones del hogar mandinka producía obstáculos

inmanejables para los planificadores, quienes habían imaginado una adopción sin complicaciones del cultivo doble.

El desarrollo de la irrigación a pequeña escala tuvo consecuencias contradictorias para las mandinkas. Si bien se amplió el calendario agrícola al cultivo anual, las mujeres pudieron resistir los esfuerzos de sus esposos para aprovecharse de su trabajo no remunerado durante dos ciclos de cultivo. Aunque el contrato conyugal seguía calibrado en función de las reivindicaciones laborales tradicionales desarrolladas para una sola temporada de cultivo, los cambios en las relaciones de producción mandinka en el ámbito doméstico reafirmaron la tenacidad de las mujeres en la defensa de sus derechos tradicionales de cultivo y obligaciones laborales. No obstante, el legado de la década de los setenta reveló, de forma notoria, que la capacidad de las mujeres para defender sus derechos consuetudinarios dependía cada vez más de su acceso a parcelas individuales de arroz de pantano. Estos derechos y atribuciones se veían amenazados en alto grado por las innovaciones tecnológicas y por un proceso laboral radicalmente nuevo que derivó del retorno a la irrigación mecanizada a gran escala en la década de los ochenta.

Un regreso a la irrigación a gran escala: el proyecto Jahaly Pacharr

La configuración particular de una sequía severa en el Sahel, altas tasas de crecimiento demográfico anual (3.5%) y políticas de comida barata contribuyeron a un sorprendente aumento en las importaciones de arroz en Gambia a lo largo de las últimas dos décadas[13]. El evidente fracaso de los proyectos de irrigación a pequeña escala para mitigar la creciente dependencia alimentaria, no obstante, fue clave para la nueva estrategia de arroz lanzada por el Estado de Gambia en 1984.[14] Para asegurar excedentes de arroz comercializables, el

13 Desde mediados de la década de 1970, las importaciones de arroz se han mantenido en un promedio de 35,000 toneladas anuales.

14 El proyecto Jahaly Pacharr se ubica en el antiguo sitio del programa de la Colonial Development Corporation, 280 kilómetros al este de la capital del país. Se fundó con un préstamo de $16.5 millones de dólares estadounidenses en términos de préstamo fácil por medio del Fondo de Desarrollo Agrícola, el African Development Fund, el Programa Mundial de Alimentos y los Gobiernos de Holanda y Alemania Occidental.

proyecto Jahaly Pacharr fue pionero en establecer nuevas condiciones de trabajo y relaciones de producción distinguidas por la coerción y la subordinación directa de las familias campesinas bajo contrato; en específico, el Estado (como gestor del proyecto) retiene el derecho a apropiarse de las parcelas irrigadas de los hogares que no logren cumplir con las rutinas de trabajo y los objetivos de productividad. Los cultivadores de arroz reciben un crédito por adelantado para la preparación del suelo y los costos del agua, que se pagará con una proporción de la cosecha del arrozal. El usufructo de la parcela se vincula a las metas de producción fijas que exigen la subordinación de los productores a un calendario altamente rutinizado y estandarizado, determinado por la administración del proyecto.

Jahaly Pacharr es un esquema de irrigación a gran escala: un sistema de suministro de agua centralizado irriga 1 500 hectáreas de pantano (de las cuales 560 son irrigadas por bombeo y otras 700 con mareas). Involucra a cuatro grupos étnicos: los mandinkas (33%), los fulas (27%), los serrahulis (23%) y los wolofs (18%) (Euroconsult, 1980). Al igual que sus antecesores, Jahaly Pacharr se basa en la disponibilidad de mano de obra familiar para el cultivo anual y en la lógica de la autoexplotación doméstica y la "competitividad" entre campesinos. En su diseño original, sin embargo, el proyecto suponía de forma bastante explícita que la carga del trabajo campesino y la capacidad de dedicación asidua al cultivo del arroz sería soportada en gran medida por las mujeres. Las metas de productividad se basaban en la fuerza de trabajo de las mujeres: "Las mujeres son mejores para trasplantar que los hombres y también son mejores para trabajar en el agua [...] así que francamente esperamos mucho trabajo de parte de las mujeres, mucho más que de los hombres" (gerente de proyecto, entrevista).[15] Las cultivadoras de arroz también se volvieron el foco de los esfuerzos de los donantes para hacer "referencia especial a las mujeres, quienes tradicionalmente han sido las mayores cultivadoras de arroz bajo las condiciones arduas de los pantanos" (International Fund for Agricultural Development, 1981). Los donantes buscaron otorgar las parcelas irrigadas por bombeo en específico a los sectores femeninos, sensibles al creciente clamor internacional ante las consecuencias adversas de los proyectos

15 Gerente del proyecto Jahaly Pacharr citado durante la primera etapa del plan en el documental *The Lost Harvest* (véase nota 61, arriba).

de desarrollo rural en las mujeres y específicamente por la incapacidad de los programas de irrigación anteriores en Gambia de llegar a las agricultoras; los donantes intentaron dar las parcelas irrigadas con bombas a mujeres, pero lo hicieron sin prestar suficiente atención a las formas en las que las definiciones simbólicas y culturales de la propiedad establecen las condiciones del acceso a y control sobre los recursos. El régimen laboral autoritario del proyecto se insertó en las relaciones familiares patriarcales sin reformarlas. La centralidad del trabajo de las mujeres para las metas de productividad y la retención de las parcelas colocó nuevas exigencias sobre la unidad de producción basada en el hogar que demostró ser incompatible con los objetivos productivos de los donantes. Jefes de familia de todos los grupos étnicos registraron las parcelas a nombre de las mujeres, pero las clasificaron como tierras del hogar (Carney, 1986: 305). La designación de parcelas irrigadas como domésticas, es decir, propiedad "comunal" —celebrada como una victoria para los derechos de las mujeres[16] —reflejó cambios importantes en el sistema de control de propiedad del hogar. Alterar los derechos de propiedad, definidos de forma estrecha como el control sobre las cosas, significa transformar las relaciones sociales y al mismo tiempo reestructurar las relaciones de producción dentro del hogar (Carney y Watts, 1990).

Luchas en torno al trabajo, luchas por el territorio

Así como la restricción al acceso de las mujeres a las tierras altas en el siglo xix otorgó el control sobre la producción de las exportaciones a los hombres mandinkas, los desarrollos de irrigación contemporáneos están profundizando el proceso de comercialización simétrica sobre ejes de género y extendiendo estas relaciones a otros grupos étnicos. En la fase actual de mecanismos de intensificación del arroz impuestas por el Estado, los jefes de familia están empleando la designación comunal (mandinka: *maruo*) de terreno irrigado para manipular las obligaciones del trabajo de las mujeres

16 Ver por ejemplo: Rycroft, C.,"How Women Were Involved in The Gambia," *International Agricultural Development* (enero- febrero 1985), 21-23, esp. 22, que apunta: "Se acordó un mecanismo más equitativo de distribución territorial, en el que los derechos de las mujeres para poseer sus propias parcelas fueron protegidos en contra de la presión por parte de los campesinos hombres … Este fue un logro notable en la sociedad de Gambia dominada por los hombres"...

como medio para controlar los frutos de la mercantilización. Y con todo, la introducción de un nuevo proceso laboral —nuevas condiciones laborales, rutinas de trabajo y patrones de movilización laboral— ha sido en sí mismo un objeto de intensa lucha y disputa. Ciertamente, antes de que las primeras semillas tocaran el suelo, las mujeres reaccionaron con fuerza. La llegada del proyecto supuso demandas radicalmente nuevas sobre sus cuerpos y de las rutinas de trabajo muy exigentes para producir una mercancía que era vista de forma simbólica como "sudor femenino".

El proyecto Jahaly Pacharr incorporó a la mayoría de las zonas tradicionales de arroz de pantano mandinka y serrahuli. Sin embargo, para las wolofs y las fulas, la ejecución del proyecto pregonó nuevas prácticas agrícolas que aumentaron sus exigencias laborales habituales. Mujeres de todos los grupos étnicos se resistieron a la intensificación de su trabajo que representaba el desarrollo del proyecto, y el foco de su lucha giraba en torno a reafirmar sus patrones preexistentes de derechos individuales al control de su trabajo y los beneficios obtenidos. Para los fulas que se dedican a la ganadería, la agricultura es una actividad secundaria, confinada en gran medida a la producción en tierras altas de mijo y cacahuate. Aunque las fulas asisten en la siembra de estos cultivos, la mayoría de su trabajo se dedica a la cría de animales, en especial, a ordeñar y procesar productos lácteos para la venta, cuyos beneficios comparten con sus esposos. Su importante aporte económico al hogar facilita que la carga de trabajo en las parcelas del proyecto se comparte de manera bastante equitativa entre los hombres y las mujeres fulas. Las serrahulis y wolofs, en contraste con las mandinkas, tienen derechos de cultivo individuales establecidos en campos de cacahuate de tierras altas que no son afectados por el desarrollo del proyecto. Aunque las mujeres serrahulis también perdieron sus campos arroceros, estas parcelas eran solo para producción comunal. Las serrahulis y wolofs, al igual que los hombres jóvenes, siguen conservando el derecho de retirar su fuerza de trabajo para la producción en las parcelas individuales durante la temporada de lluvias. Este control parcial sobre la mano de obra les proporciona un baluarte desde el que pueden resistirse a las demandas de los hogares, para que asuman la mayor carga de trabajo asociada al doble cultivo.

En consecuencia, cuando las serrahulis y las wolofs trabajan en los campos del proyecto, son compensadas con arroz. Las mandinkas, por el contrario, han quedado en una posición mucho más vulnerable, ya que sus regiones tradicionales de arroz de pantano fueron incorporadas directamente al proyecto; en el futuro, sus derechos de cultivo individuales dependerían del acceso a las parcelas del proyecto. Las mandinkas eran bien conscientes de que si sus derechos de propiedad no se reafirmaban y defendían, se arriesgaban a la pérdida de todas las parcelas individuales *kamanyango* y, lo que es más importante, enfrentaban la erosión de todas sus protecciones frente a las demandas generadas desde el hogar sobre su trabajo (Carney, 1994). Esta vulnerabilidad se articuló de manera potente por una mandinka en la localidad de Jahaly Pacharr: "Parece que este proyecto es igual al proyecto chino que sufrimos antes. No vamos a tolerar eso otra vez […] tengo que decirles esto a los hombres. Nosotras las mujeres no vamos a tolerar la forma en la que nos han tratado en el pasado. Estábamos dormidas entonces. Pero ahora estamos despiertas" (Koita, en Hobson, 1983).

La importancia de la mano de obra familiar femenina en la empresa doméstica mandinka se puso de manifiesto durante el primer periodo de cultivo de la temporada seca de 1985. Las mujeres proporcionaban la mayoría de las horas laborales en las parcelas bombeadas, mientras que el jefe del hogar, varón, mantenía su control tradicional sobre la producción *maruo.* Al ejercer sus derechos históricos sobre el arroz producido en los campos familiares, el jefe del hogar se ha beneficiado materialmente de la revolución verde en Gambia. Es él quien comercializa y vende el arroz de la parcela, y quien se apropia individualmente de los ingresos generados por los excedentes vendidos. Además, los excedentes invertibles, en términos locales, son bastante sustanciales. El valor del excedente promedio producido en las parcelas irrigadas por bombeo en 1984 representó el triple de los ingresos antes del proyecto (Carney, 1987; 1988b). El sutil proceso por el cual ha cambiado la clasificación de la tenencia de la tierra permite que hombres mayores reclamen el trabajo de las mujeres, no pagado y no compensado, mientras que el producto de campos nominalmente "colectivos" es apropiado individualmente.

La innovación tecnológica y una reestructuración del proceso laboral por medio de la intensificación del arroz también ha reconstituido de facto el contrato conyugal que regula a la familia mandinka y las relaciones de producción. Los hombres cabeza de familia han expandido su hegemonía doméstica dentro de la familia por medio de una cuidadosa manipulación y centralización de los derechos de cultivo y de trabajo. Las mujeres dependientes, por el contrario, han perdido sus campos de arroz individuales y han presenciado una erosión tanto de su autonomía dentro de la unidad doméstica como de las tradicionales reciprocidades entre esposos. La compleja recomposición del trabajo y la reclasificación de los derechos de propiedad, sin embargo, no ha ocurrido sin disputas y de hecho ha dado luz a nuevas luchas por los derechos de cultivo y en torno a las obligaciones laborales que se negocian y resisten en varios terrenos materiales, simbólicos e ideológicos.

Durante el segundo ciclo de cultivo de temporada de lluvia, cuando los hombres mandinkas dependientes se concentraron en sus cultivos *kamanyango* de cacahuate en tierras altas, las mujeres presionaron por un reconocimiento oficial de sus derechos individuales de cultivo. La importancia de su trabajo para la retención del usufructo parcelario del hogar brindaba una suerte de cabeza de puente para que las mujeres afirmaran de modo enfático sus derechos de cultivo tradicionales dentro de los parámetros fijados por el proyecto operado por el Estado. Los esfuerzos iniciales de las mujeres se enfocaron en convencer a la administración de designar el resto del terreno del proyecto —las parcelas mareales y pluviales disponibles para el cultivo en temporada de lluvias—como *kamanyango.* Pero la preocupación predominante de la administración por la productividad y, por ende, por la movilización e intensificación del trabajo familiar hacía que los gestores no estuvieran dispuestos a abogar por acciones que pudieran reducir la disponibilidad de mano de obra para la irrigación. Como categoría laboral, el *maruo* por sí solo brindaba el marco institucional doméstico dentro del cual se podían articular el control y las titularidades sobre el trabajo dependiente. Las mujeres, por tanto, se vieron obligadas a negociar a favor de sus derechos de cultivo individuales mediante las mismas estructuras sociales patriarcales que buscaban negarlos desde un

inicio. Cuando estos esfuerzos fracasaron, las mujeres exigieron una remuneración por su trabajo produciendo arroz que saliera de las ganancias de las parcelas irrigadas por bombeo.

Ha sido dispar el éxito de las mandinkas al negociar su remuneración laboral —en cierto sentido, renegociando los términos y condiciones del contrato conyugal—. Para finales del tercer año de cultivo del proyecto (1986), habían surgido tres resoluciones generalizadas en los hogares del proyecto. En algunos hogares con acceso a otros tipos de tierra para el proyecto, se reconocieron los derechos de cultivo de las mujeres; les concedieron usufructo a parcelas irrigadas por estaciones húmedas y mareales. En otros, los derechos de cultivo de las mujeres a veces se sostenían; pero en tanto que el hogar tenía acceso nulo o limitado a otros tipos de terreno del proyecto, los hombres compensaban el trabajo de sus mujeres con una proporción de arroz. En estos hogares, la relación de aparcería externa (es decir, administración del hogar) se había internalizado dentro del contrato conyugal. En otros, no se reconocían los derechos de cultivo de las mujeres y la unidad familiar no brindaba acceso a otras parcelas del proyecto ni remuneración laboral de ningún tipo (Carney, 1987). En este último caso las mujeres han sido, en esencia, proletarizadas.

El proyecto Jahaly Pacharr incluye casi 2.000 hogares en setenta aldeas, pero hasta que se realicen más rastreos no tenemos a la mano un cuadro completo de las luchas de género y políticas de producción. Sin embargo, sí se pueden identificar patrones estructurales clave y relaciones que dan forma a la capacidad de las mujeres para asegurar derechos de cultivo o compensación laboral. En una aldea dotada de acceso a parcelas, tanto bombeadas como no bombeadas, las mujeres recibieron los derechos *kamanyango* por los que pelearon en las zonas mareales y de lluvia. La negociación colectiva de las mujeres agricultoras en la aldea fue exitosa, pero el apoyo y la presencia de la hija del jefe en el influyente comité de asignación territorial del proyecto resultó fundamental.[17] En otra

17 El proyecto heredó tantos conflictos entre hogares e intrahogar que competían por las tierras del esquema Colonial Development Corporation, que los donantes insistieron en que los comités de asignación de tierras para los pantanos de Jahaly y Pacharr tuvieran una representación femenina de 50%. Estos comités sirven como conducto entre la administración del proyecto y los campesinos participantes.

comunidad, similar en apariencia, situada a pocos kilómetros de distancia, las mujeres no tuvieron éxito al reclamar a los ancianos de la aldea derechos de usufructo en zonas de marea, un fracaso que produjo negociaciones complejas sobre sus derechos territoriales, con resultados desiguales.

En una aldea estudiada que no tiene poder sobre parcelas mareales ni pluviales, la resolución doméstica de conflictos se enfocó en la remuneración. A un puñado de hogares de élite con varios terrenos del proyecto les han concedido a sus parientes mujeres derechos *kamanyango* a una de las parcelas de bombeo; alrededor de 15% de los hogares de la aldea que comparten una parcela bombeada con una o dos familias más no pudieron remunerar a las mujeres por su trabajo. Solo 20% de estos hogares concedieron a las mujeres una proporción fija por arrozal a cambio de su trabajo.[18] Ante el fracaso para recibir alguna forma de remuneración, muchas mujeres han retirado por completo su mano de obra. En resumen, se han negado a trabajar en las parcelas bombeadas y han boicoteado las operaciones de arroz de regadío. De hecho, están en huelga.

Al sustraer su fuerza de trabajo, se percibe típicamente (por parte de los hombres) que las mujeres incumplen sus obligaciones tradicionales. Con sus acciones, corren el riesgo de ser cuestionadas y recibir regaños y, en ocasiones, palizas. Cualquiera que sea el descontento cultural y simbólico fomentado por la sustracción de la fuerza de trabajo, tiene un impacto de largo alcance en la organización social de la producción familiar. Muchos hogares con escasez de mano de obra se adhieren al calendario de siembra del proyecto solo con grandes dificultades, una condición que ha contribuido a las bajas cosechas.[19] Si bien las reducciones en las cosechas no son tan bajas como para amenazar el usufructo de la parcela, sí limitan el potencial del proyecto para rendir a su capacidad tecnológica. Además, la sustracción laboral de las mujeres se ha resuelto con un aumento en la contratación de mano de obra, lo cual crea en efecto un emergente

18 El porcentaje de la cosecha que recibían las mandinkas a inicios de 1987 se promediaba en 10% del valor generado por cada arrozal, que fluctúa entre 150 y 500 dalasis por año ($20-70 dólares estadounidenses). Cf. Carney, 1988a: 344.

19 Desde 1984 a 1986, la producción promedio de las cosechas en temporada seca irrigadas por bombeo decayó de 7.5 toneladas a 5.7 toneladas por hectárea (Carney, 1987: 34).

mercado de trabajo rural desde 1984. El valor del trabajo a sueldo para el año de cultivo de 1986 se aproxima mucho (en equivalentes de arroz) a la remuneración que reciben las mujeres en los hogares con pactos de aparcería entre esposo y esposas.[20]

Es de mayor relevancia que la mayoría de la mano de obra a sueldo en las aldeas mandinkas son precisamente aquellas mujeres que han sido proletarizadas por la llegada de la mecanización del arroz. Al haber perdido el acceso a los terrenos arroceros, ahora concentran su actividad económica en el mercado local de trabajo a sueldo en granjas de irrigación, un desarrollo que ha contribuido a la transformación de las redes femeninas de trabajo recíproco (*kafo).* A lo largo de la historia, los *kafos*, organizados por grupos de edad, movilizaron grandes grupos de trabajo para operaciones agrícolas o funcionaron como una reserva laboral auxiliar para mujeres enfermas, embarazadas o de alguna otra forma incapaces de atender sus campos. El dinero recolectado típicamente servía como un fondo común para la asistencia financiera y para ocasiones ceremoniales. Entre las mandinkas proletarizadas que han perdido titularidad a la tierra, los grupos de trabajo recíproco ahora sirven como un marco de organización para reclutar y organizar el trabajo en cuadrillas. En agudo contraste con el periodo preproyecto, las ganancias del *kafo* ya no se acumulan para las necesidades mutuas, sino que se dividen como un sueldo entre las participantes individuales. Al formar cuadrillas de trabajo que de forma rápida y efectiva completan operaciones importantes en las parcelas irrigadas, las mujeres en realidad reciben un mejor sueldo rural que el de trabajadores formales por jornada.[21]

Las dificultades a los derechos de propiedad de las mujeres y sus obligaciones laborales han detonado una serie de respuestas que han profundizado e intensificado tensiones domésticas históricas latentes. El hogar

20 Durante 1986, los hogares promediaban $30-$85 dólares estadounidenses por trabajo contratado, en comparación con los $20-$70 dólares estadounidenses por arrozal a sus esposas involucradas en los arreglos de aparcería (Carney, 1987: 34).

21 Por ejemplo, un grupo de veinte mujeres usualmente cobran ochenta dalasis por transplantar una parcela irrigada, y normalmente completan dos al día. Cada mujer por lo tanto gana ocho dalasis en vez de cinco ($0.70 dólares estadounidenses), la tarifa del sueldo diario (Carney, 1987: 34). Ibíd

se ha convertido en un terreno de intensa lucha, negociación y victorias limitadas que han desafiado, si bien de forma oblicua, las representaciones dominantes del género y el poder patriarcal. Aun donde las mujeres han perdido acceso a la tierra, han respondido usando instituciones sociales preexistentes para aumentar su sueldo diario.

Conclusión

¿Y si el hogar nunca es un dulce lugar después de todo?
¿Podría ser que todas las cartas que creíamos que eran corazones
fueran sólo picas de diferentes colores?

Nancy Folbre

Los programas arroceros de los Estados coloniales y poscoloniales en Gambia se pueden entender como proyectos para construir un campesinado fiable y trabajador en los arrozales. Como señala Keith Hart, la intensificación agrícola, sobre todo en la producción de arroz húmedo, es un proceso esencialmente coercitivo que intenta lograr que la gente trabaje más duro (Hart, 1982: 48). En el caso mandinka, nuestra reconstrucción histórica de las estrategias sucesivas de sustitución de importación de arroz revela lo disparejo y contradictorio que ha sido el proceso de intensificación y disciplinamiento del trabajo. El deseo por expandir la producción de arroz doméstica en Gambia confronta la estructura existente de relaciones de propiedad precapitalistas y ha planteado la pregunta de quién trabajará y en qué condiciones. En primer lugar, la estricta división sexual del trabajo por producto demostró ser infranqueable, y cuando los hombres se resistieron al cultivo del arroz, las mujeres trabajaron más duro y más horas en los pantanos de arroz recién inaugurados. Los límites físicos de la capacidad de las mujeres para trabajar en los pantanos de arroz en relación con otras exigencias sobre su tiempo representaron un obstáculo que solo se pudo superar con un cambio radical en la productividad laboral. En específico, esto tomó la forma de irrigación mecanizada y el doble cultivo, introducida de forma vacilante desde 1950 en adelante.

Si bien los hombres han sido incorporados de modo gradual al cultivo del arroz —en especial en la producción de la temporada seca— la fuerza laboral y el conocimiento de las mujeres de la agroecología del arroz sigue siendo clave. Sin embargo, de manera más fundamental, los esfuerzos del Estado para aumentar la producción del arroz —ya sea por medio del cultivo en pantanos extensivo en tierras, intensivo en trabajo, o bien mediante el doble cultivo mecanizado, intensivo en tierra— han desencadenado luchas sobre el acceso a y el control sobre los recursos del hogar. Mientras que los conflictos generacionales y otros conflictos domésticos también figuran de manera significativa, son las luchas de género en el seno de los hogares —y la renegociación de la conyugalidad en particular— las que golpean al corazón en el deseo del Estado por crear un campesinado arrocero. Las luchas de género en torno a la propiedad, el trabajo y las condiciones laborales no son simples añadidos al debate en torno a la intensificación agrícola, sino que lo constituyen. Han configurado y configuran el carácter y la trayectoria del propio cambio agrario.

El impacto de una nueva innovación tecnológica en la década de los ochenta en forma de contratación de riego en Jahaly Pachar ha alterado de forma radical la estructura interna de los hogares mandinkas, y profundizado e intensificado las disputas en el ámbito doméstico. Un entendimiento pleno de estas disputas, sin embargo, requiere que abramos la caja negra del hogar y examinemos los circuitos de capital económico, simbólico y cultural que se encuentran dentro. Los múltiples conflictos generados por el proyecto Jahaly Pacharr nos han sugerido dos preguntas analíticas importantes. La primera se refiere al porqué el ámbito doméstico y en específico el conyugal es tan central en las respuestas mandinkas a la mecanización del arroz; y la segunda es sobre las conexiones entre la política doméstica y la política más amplia, quizá en el plano comunitario, regional o de clase. Respecto a la primera pregunta, hemos ofrecido una respuesta en gran medida teórica que fusiona dos ámbitos: el proceso laboral y una teoría del hogar o emprendimiento familiar. La unidad característica del trabajo y la propiedad en formas de producción campesina plantea la posibilidad, que se realiza durante la agricultura por contratación, de condensar la producción y la política familiar en una esfera: el ámbito doméstico. Como bien lo explica

Harriet Friedmann: "La empresa familiar es el campo de batalla en torno al patriarcado donde la propiedad está inmediatamente en juego" (Friedmann, 1986: 192). El nuevo proceso laboral en Jahaly Pacharr de inmediato puso en riesgo estas relaciones de propiedad y, por tanto, laborales; de hecho, agudizó lo que estaba en juego. El proyecto, pues, se politiza inmediata y decisivamente en el ámbito de la producción. En vista de la historia reciente y los conflictos territoriales-laborales en Gambia, las luchas domésticas por necesidad fueron explosivas y primarias en la medida que la producción del arroz se desarrolló en nuevas condiciones laborales contractuales y comparativamente regimentadas.

La segunda pregunta sobre las conexiones es más compleja. Por un lado, las luchas no deben interpretarse de forma estrecha, basadas solo en relaciones de género o intrafamiliares, ya que salen por completo del hogar. Incluso antes de que se sembraran las primeras semillas de la revolución verde, las mujeres Jahaly organizaron una delegación al ministro de Cooperativas (Watts, en prensa 1); luego, hicieron una petición a la administración pidiendo acceso a los campos mareales, llevaron algunas reclamaciones por tierras a las cortes locales (Carney, 1987: 23) y, no de menor importancia, definieron su trabajo grupal como algo explícitamente político al negociar de manera colectiva para aumentar sus sueldos diarios. Al menos en una aldea, el atractivo de las parcelas del proyecto parece haber intensificado las tensiones étnicas existentes desde hacía tiempo entre las comunidades mandinkas y fulas. Algunas de las conexiones con el interés social más amplio son menos evidentes, aunque esto podría reflejar la relativa novedad del proyecto. Los productores locales no se han organizado en asociaciones de cultivadores ni han utilizado sus cooperativas locales o partidos políticos como mediadores entre la administración o el Estado y los cultivadores, como ha sucedido en otros programas de agricultura por contrato (Watts, 1990). En parte, este fracaso para organizarse podría reflejar el hecho de que Gambia, como muchos otros países del sub-Sahara, históricamente no tiene una clase terrateniente y, mientras que el proyecto se ha apropiado de los terrenos en los contratos, existe mucha confusión entre los productores respecto a lo que esto significa en la práctica. El proyecto siente que los agricultores no tienen derechos de

propiedad sobre la tierra y, por tanto, pueden ser removidos del proyecto en caso de baja productividad o contravención del contrato. Por el contrario, los campesinos creen de manera uniforme que las parcelas irrigadas siguen siendo propiedad comunal. Para 1989, ningún campesino había sido rescindido y, por tanto, el tema sigue siendo discutible.

Sin embargo, la tenencia y el desalojo de la tierra constituyen en potencia un crisol en el que se forjan otros conflictos sociales más amplios. La administración ya ha advertido a los cultivadores de los problemas contractuales (como retrasos en las prácticas de desyerbe); estos campesinos son casi uniformemente cultivadores —hombres— mandinkas, agobiados por la sustracción de la fuerza de trabajo de sus esposas e incapaces de cumplir con las rutinas estrictas de trabajo de la administración.[22]

También hay algunas instituciones que de forma explícita conectan los ámbitos domésticos con otros más amplios, de las cuales la más obvia es el islam. Reconociendo que el comportamiento familiar apropiado a menudo se mide según la noción de un buen musulmán, la administración de Gambia articula las expectativas con un vocabulario islámico de generosidad y justicia. Al mismo tiempo, las mujeres invocan debates culturales internos dentro del islam relacionados con el género y el estatus de las mujeres en el mundo musulmán para negociar y sancionar sus propias demandas. No obstante, hasta que el proyecto transforme dramáticamente la diferenciación socioeconómica local y hasta que el Estado actúe conforme a su poder jurídico para remover a los campesinos de sus tierras, la posibilidad de una vectorización horizontal más inclusiva de intereses y la génesis de intereses de oposición a una escala más amplia debe permanecer como algo más o menos remoto.

La preponderancia de las luchas domésticas y locales de género en este momento del desdoblamiento de la mecanización del arroz de Gambia no debería ocultar el nivel en el que los debates internos en el ámbito doméstico no son solo locales y familiares. De hecho, el caso Jahaly Pacharr revela cómo la organización de los hogares en torno al poder patriarcal

22 De hecho, la administración del proyecto percibe a muchas campesinas mandinkas como "flojas" y "malas agricultoras", dotadas de una preferencia cultural por el ocio más que por el trabajo duro.

deriva en apoyo por parte del Estado, tanto mediante las exigencias burocráticas de la organización del Estado como por la devolución del poder a los hombres adultos por parte de programas de desarrollo administrados por el Estado. Dicho poder del Estado, no obstante, es discutido, con un desenlace que produce reconfiguraciones complejas de las relaciones asimétricas dentro de los hogares. Esfuerzos sucesivos por producir un campesinado femenino arrocero disciplinado en Gambia revelan en este sentido que los análisis de la transformación agraria deben asimilar no sólo cómo las estructuras políticas económicas más grandes enmarcan el terreno doméstico del conflicto, sino, al mismo tiempo, cómo las luchas domésticas dan forma a ciertos procesos sociales y políticos que pueden desafiar las estructuras mismas de maneras limitadas.[23]

Referencias[24]

Adanson, M. (1759). *A voyage to Senegal, the isle of Goree and the river Gambia*. London: Nourse.

Baldwin, K. (1957). *The Niger agricultural project*. Harvard University Press.

Beneria, L. y M. Roldán (1987). *The crossroads of class and gender*. University of Chicago Press.

Ester Boserup, *Women 's Role in Economic Development* (Londres: Allen & Unwin, 1970), 16.

Brautigam, D. (1984). *The People's Republic of China irrigated a rice project in The Gambia*. Working Document no. 42, Gambia River Basin Studies. Center for Research on Economic Development.

Burawoy, M. (1985). *The politics of production*. London: Verso.

23 Existen algunas similitudes sorprendentes entre Jahaly Pacharr y los esquemas arroceros en Malasia; notablemente, Muda, donde la intensificación laboral en relación con el género es clave. Cf. Hart, 1988. Este argumento se desarrolla en Watts (1989; en prensa 1).

24 N de T.: El formato de las referencias bibliográficas ha sido adecuado a los criterios de uniformidad adoptados para esta obra. Se han respetado íntegramente todas las fuentes originales, procediendo únicamente a una actualización formal de su presentación.

Carney, J. (1984). *Rice cultivation systems of The Gambia. Working Document no. 23*. University of Michigan, Gambia River Basin Studies (Center for Research on Economic Development, Ann Arbor, Mich.).

Carney, J. (1986). *The social history of Gambian rice production: an analysis of food security strategies* [tesis de doctorado, Universidad de California].

Carney, J. (1987). *Contract farming in irrigated rice production: Jahaly Pacharr project, The Gambia*. Contract Farming in Africa Project Working Paper no. 9. Institute for Development Anthropology;

Carney, J. (1988a). Struggles over crop rights and labour within contract farming households in a Gambian irrigated rice project *Journal of Peasant Studies*, *15*(3) (abril), 334-349.

Carney, J. (1988b). Struggles over land and crops in an irrigated rice scheme. En J. Davison (ed.). *Agriculture, women and land* (59-78). Westview

Carney, J. (1989). Gender and rural transformation in The Gambia [ponencia en reunión anual de la Association of American Geographers, Baltimore, 14-22 de marzo].

Carney, J. (1994). Contracting a food staple in The Gambia. En P. Little y M. Watts (eds.). *Peasants under contract: contract farming and agrarian transformation in Sub-Saharan Africa* (167-187). The University of Wisconsin Press.

Carney, J. y M. Watts. (1990). Manufacturing dissent: work, gender and the politics of meaning in a peasant society. *Africa*, *60*(2), 207-241.

Colonial Office. (1849, June 16). *MacDonnell to Gray* (CO 87/45) [Manuscript].

Colonial Office. (1851, May 1). *CO 87/50* [Manuscript].

Cowen, M. (1984). The early years of the Colonial Development Corporation. *African Affairs*, *83*(330), 63-75.

Clark, W. M., & Hutchinson, F. H. (1948). *West African Rice Mission Report* [Manuscript]. National Archives of The Gambia, 2/3240.

Dawe, M. T. (1921). *Report on agricultural conditions and needs of The Gambia* [Manuscript]. National Archives of The Gambia.

Dey, J. (1980). *Gambian women and rice development in The Gambia* [tesis de doctorado, University of Reading].

Dey, J. (1981). Gambian women: unequal partners in rice development projects? *Journal of Development Studies*, *17*(3) (abril), 109-22.

Donelha, A. (1977). *An account of Sierra Leone and the rivers of Guinea and Cape Verde*. Junta de Investigaciones Científicas Ultimar. Lisboa

Euroconsult. (1980). *Feasibility study: Jahaly and Pacharr swamps, final report*. Arhem, The Netherlands: Euroconsult.

Friedmann, F. (1986). Patriarchy and property. *Sociologia Ruralis*, *36*(2), 186-193.

Folbre, N. (1986). Hearts and spades: paradigms of household economics. *World Development*, *14*(2), 245-56.

Gamble, D. (1949). *Contributions to a socio-economic survey of The Gambia*. Her Majesty's Stationery Office.

Gillespie, J. (1954). *Gambia rice farm annual report*. Colonial Development Corporation.

Guyer, J. (1986). Intrahousehold processes and farming systems research. En J. Moock (ed.), *Understanding Africa's rural households and farming systems* (pp. 92-104). Westview.

Guyer, J. I. (1988). Dynamic approaches to domestic budgeting: Cases and methods from Africa. In D. Dwyer & J. Bruce (Eds.), *A home divided: Women and income in the Third World* (155–172). Stanford University Press.

Guyer, J. y P. Peters (eds.). (1987). Special issue: Conceptualizing the household. *Development and Change*, *18*(2), 197–214.

J. E. Y. Hardcastle, Report on a Visit to The Gambia and Senegal (Rokupr, Sierra Leone: West African Rice Research Station, 1961);

Hart, K. (1982). *The political economy of West African agriculture*. Cambridge University Press.

Hart, G. (1988). *Disaggregating the household: gender, kinship and the dynamics of agrarian change*. Harvard Institute for International Development. [Mecanuscrito].

Haswell, M. (1953). *Economics of agriculture in a savannah village*. Colonial Office Research Study no. 8. London: Her Majesty's Stationery Office.

Haswell, M. R. (1963). *The Changing Pattern of Economic Activity in a Gambia Village*. Department of Technical Cooperation, Overseas Research Publications no. 2. London: Her Majesty's Stationery Office

Hobson, S. (Producer). (1983). *The lost harvest* [Film; documentary]. British Broadcasting Corporation.

International Fund for Agricultural Development. (1981). *IFAD revised appraisal report: Jahaly and Pacharr Smallholders Project*. The Gambia: Ministry of Agriculture.

Jeng, A. (1978). *An economic history of The Gambian groundnut industry, 1830-1924: the evolution of an export economy* [tesis de doctorado, University of Birmingham].

Jobson, R. (1904). *The golden trade*. Teignmouth:Speight & Walpole.

Lele, U. y S. Stone. (1989). *Population pressure, the environment and agricultural intensification: variations on the Boserup hypothesis.* Managing Agricultural Development in Africa / I*nternational Bank for Reconstruction and Development. paper 4, washington D. C.: World Bank.*

Lewicki, T. (1974). *West African food in the Middle Ages*. London: Cambridge.

Linares, O. (1985). Cash crops and gender constructs: the Jola of Senegal. *Ethnology*, *24*(2), 83-93.

MacCluskie, H. (1958). *Report on the Gambia Rice Farm*, *1952-1958*. Colonial Development Corporation.

Moore, F. (1738). *Travels into the inland parts of Africa*. London: Edward Cave.

Moore, H. (1988). *Feminism and anthropology*. Cambridge: Polity.

National Archives of The Gambia. (1861). *Annual report* (87/71) [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1897). *Travelling Commissioners Reports, 1893–1899: Letter by Governor Llewelyn* [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1893–1917). *Travelling Commissioners Reports* [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1923–1936). *11/1 Agricultural Reports* [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1929, October 10). *Correspondence between Governor Denham and Lord Passfield, Secretary of State for the Colonies* (2/961) [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1942, December 19). *Extract of letter sent by Governor Blood to the Colonial Office* (2/3243) [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1943). *Development and welfare in The Gambia*. Bathurst: Government Printer.

National Archives of The Gambia. (1943b). *Department of Agriculture files* (52:47/50) [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1952). *Gaitskell Report* [Manuscript]. 2/3313, p. 22.

National Archives of The Gambia. (1954). *2/3313 R/293a, vol. 1* [Manuscript].

National Archives of The Gambia. (1958). *Gambia Rice Farm Annual Reports, 1952–1958* [Manuscript].

Parker, H. (1901). *Report on proposed irrigation at The Gambia* [Manuscript]. National Archives of The Gambia, 2/291.

Parker, H. (1903). *Second report on proposed irrigation at The Gambia* [Manuscript]. National Archives of The Gambia, 2/291

Proceedings of the Third Conference of Protectorate Chiefs, Sessional Paper no. 1 (Bathurst: Government Printer, 1946).

Public Record Office. (1860). *D'Arcy to Newcastle* (Colonial Office 87/69) [Manuscript].

Public Record Office. (1849). *MacDonnell to Grey* (Colonial Office 87/45) [Manuscript].

Rahman, A. K. (c. 1949). *"Land tenure" in Genieri* [Unpublished notes, made available by D. Gamble].

Robertson, A. F. (1987). *The dynamics of productive relationships*. Cambridge: Cambridge University Press.

Roddan, G. M. (1943). *A report on rice cultivation in The Gambia*. Sessional Paper no. 2. Government Printer. National Archives of The Gambia.

Rhodes House Library. (n.d.). *MSS. Afr.s 945* [Manuscript]. Oxford University.

Rycroft, C., 1985. How Women Were Involved in The Gambia. *International Agricultural Development*, *5*(1),

Sharma, U. (1980). *Women, work and property in North-West India*. London: Tavistock

Sharma, U. (1986). *Women's work, class and the urban household*. London: Tavistock.

Swindell, K. (1980). Serawoolies, Tillibunkas and strange farmers: the development of migrant groundnut farming along the Gambia River, 1848-95. *Journal of African History*, *21*(1), 93-104.

Swindell, K. (1981). *Strange farmers of The Gambia: a study of the redistribution of an African population*. Centre for Development Studies, Monograph no. 15. Swansea: University College.

Thompson, E. P. (1967). Time, work discipline and industrial capitalism. *Past & Present, 38*, 56–97.

Watts, M. (en prensa 1). *Manufacturing dissent: food and production politics in a peasant society*. London: Heinemann.

Watts, M. (en prensa 2). The past in the present: the moral of irrigation failure in The Gambia. *Agricultural History*.

Watts, M. (1989). The agrarian question in Africa: debating the crisis. *Progress in Human Geography*, *13*(1), 1-41.

Watts, M. (1990). Peasants under contract: agro-food complexes in the third world. En H. Bernestein, B. Crow, M. Mackintosh y C. Martin (eds.). *The food question* (pp. 149-162). Monthly Review Press

Weil, P. (1973). Wet rice, women, and adaptation in The Gambia. *Rural Africana*, *19*(invierno), 20-29

Weil, P. (1982). Agrarian production, intensification and underdevelopment: Mandinka women of The Gambia in time perspective. En C. Curtis (ed.), *Proceedings of the Title XII Conference on women in development* (pp. 37-77). University of Delaware.

Whitehead, A. (1981). "I'm hungry mum": The politics of domestic budgeting. In K. Young, C. Wolkowitz, R. McCullagh (Eds.), *Of marriage and the market* (88–111). London: Methuen.

28. Nutriendo a las mujeres: hacia una ecología política feminista de la agricultura apoyada por la comunidad en Estados Unidos[1]

Lucy Jarosz

Resumen: Este artículo examina las motivaciones de las agricultoras que participan de manera activa en la agricultura sustentada por la comunidad. Partiendo de entrevistas con agricultoras situadas en una región metropolitana de Estados Unidos, sostiene que las motivaciones de estas mujeres expresan una ética del cuidado que define su trabajo como centrado en alimentarse a sí mismas y a los demás. Las mujeres llegaron a este trabajo como una elección consciente para cambiar su vida-trabajo. Estas elecciones se ven influidas por el contexto urbano de sus prácticas agrícolas y también por su raza y estatus de clase media. Estas motivaciones y elecciones expresan una ética del cuidado centrada en el autocuidado. Inspirándose en la ética del autocuidado de Foucault, tales motivaciones expresan una transformación liberatoria del yo que también es responsable radicalmente hacia los demás y expresiva de una política poscapitalista. Las prácticas agrícolas articuladas por una base ética corresponden al desarrollo de políticas poscapitalistas que desafían la formación neoliberal de los sujetos en la producción y el consumo de alimentos. La ética del cuidado feminista contribuye a una ecología política feminista al enfocarse en las relaciones sociales de las prácticas de cuidado y, también, al revelar cómo el autocuidado en el caso de las agricultoras urbanas de clase media, activas en la agricultura comunitaria, se incorpora de manera ética y es políticamente transformador.

Palabras clave: ecología política; ética del cuidado; agricultura sostenible.

1 Publicado originalmente en: Lucy Jarosz, 2011, "Nourishing women: toward a feminist political ecology of community supported agriculture in the United States", *Gender, Place & Culture*, 18(3), 307-326.

Introducción

Parado encima de una sopa burbujeante, cierro los ojos e inhalo.
Del suelo para arriba, todo lo relacionado con el alimento me tranquiliza el alma.

Kingsolver (2007: 125)

Según la Organic Farming Research Foundation, 22% de la gestión de granjas orgánicas en Estados Unidos en 2002 estuvo a cargo de mujeres. En 2001, un tercio de los agricultores orgánicos en Canadá eran mujeres (Canadá, 2001). En el Reino Unido, las mujeres representan menos de 10% de todos los agricultores, pero constituyen la mitad de todos los agricultores orgánicos (Buckingham, 2005). A medida que aumenta el número de mujeres que practican agricultura orgánica a pequeña escala en América del Norte, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, su presencia en la agricultura sustentada por la comunidad (CSA, siglas en inglés),[2] tanto como consumidoras y productoras, es llamativa en particular. ¿Qué motiva a las mujeres a practicar agricultura sustentada por la comunidad? Examino las motivaciones de las agricultoras involucradas de manera activa en la agricultura sustentada por la comunidad por medio de un estudio de caso cualitativo situado en una región metropolitana de Estados Unidos. El propósito de este estudio no es contar cuántas mujeres comparten estas motivaciones particulares, sino enfocar etnográficamente cómo las mujeres hablan sobre lo que les motiva a adentrarse en la agricultura a pequeña escala, algo que involucra trabajo duro y muy poca ganancia monetaria, y darle seguimiento.

Basándome en las respuestas de las agricultoras, continúo argumentando que las motivaciones de estas mujeres expresan una ética del cuidado que define su trabajo como centrado en alimentarse a ellas mismas y a otros. Estas prácticas agrícolas éticamente informadas corresponden al desarrollo de

2 La agricultura sustentada por la comunidad significa que los consumidores pagan a los agricultores una tarifa de suscripción fija al inicio de la temporada de cultivo a cambio de cajas semanales de comida cultivada en la granja durante la temporada de cultivo.

lo que Gibson-Graham (2006) llama políticas poscapitalistas. Las políticas poscapitalistas hacen hincapié en el cuidado y la alimentación de las personas y el ambiente como parte de una postura ética que desafía los procesos de privatización, la acumulación de capital sin restricciones, la competitividad y los discursos de responsabilidad personal por la desigualdad y la pobreza, que construyen a los individuos como sujetos neoliberales (Davies *et al*., 2006). Retomando a Foucault (1988), amplío esta afirmación al señalar que alimentar al yo es un acto de involucramiento relacional vinculado a alimentar a otras personas y lugares. Concluyo analizando cómo la ética del cuidado puede enriquecer los debates sobre la ética en la ecología política.

A partir de mis entrevistas, asevero que las motivaciones de las mujeres para dedicarse a la agricultura no se basan tanto en consideraciones de subsistencia como en el apoyo de un modo de vida concreto. Estos modos de vida surgen de biografías y elecciones individuales que dependen de la clase, la edad, el estado civil, el nivel educativo y el contexto urbano. Las agricultoras consideran que alimentarse a sí mismas y a los demás es una motivación importante para dedicarse a la agricultura. Al poner de relieve una ética del cuidado en el aprovisionamiento de alimentos, estas agricultoras privilegian las relaciones sociales y "hacer una vida", en lugar de ganarse la vida por medio de sus prácticas agrícolas. La ecología política se enriquece gracias a las aportaciones desde una ética feminista del cuidado, que atiende al cómo alimentarse a una misma y a los demás y que constituye la base de una política de transformación liberadora que desafía los discursos hegemónicos del neoliberalismo.

Hacia una ecología política feminista de una agricultura alternativa

El ecofeminismo es un movimiento que afirma vínculos entre los feminismos y los movimientos de defensa del ambiente. El ecofeminismo presenta una multiplicidad de posturas y teorizaciones respecto a estas conexiones. Sturgeon (1997) subraya cinco teorías generales dominantes distintas en los debates ecofeministas sobre la relación de las mujeres con el ambiente. La primera afirma que es necesaria una comprensión del patriarcado para explicar las formas en que se equipara a las mujeres

con el ambiente. La segunda, una inversión de la primera, afirma que es necesario un análisis ecologista para explicar las formas en las que las mujeres son subordinadas en la cultura occidental. Una tercera sostiene que las mujeres están biológicamente más cercanas a la naturaleza y que esto a la vez las beneficia y las oprime. La espiritualidad feminista, expresada en religiones basadas en la naturaleza como el paganismo, la brujería y el culto a las diosas compone una cuarta postura. La quinta teorización investiga la relación entre las mujeres y el ambiente por medio de un análisis histórico, transcultural y material del trabajo productivo de las mujeres para revelar la relación entre el cambio ambiental y el trabajo cotidiano de las mujeres.

La ecología política feminista se inspira en la primera y la última de estas cinco teorías, que caracterizan ampliamente el diverso ca|mpo de estudio y el movimiento social que es el ecofeminismo. En lugar de afirmar que el análisis ambiental revela la subordinación de las mujeres, la ecología política feminista trata de explicar cómo los conocimientos de las mujeres y la división sexual del trabajo son claves para entender la degradación y el cambio ambiental. Este enfoque se centra en cómo el género, la raza, la etnia y la clase social determinan el acceso individual y colectivo a los recursos sociales, naturales y los consiguientes cambios ambientales. La ecología política feminista se preocupa por cómo las relaciones sociales dan forma a la distribución, el acceso y el control de los recursos. Este enfoque analítico destaca el papel del conocimiento, la ideología y los procesos laborales en la comprensión del desarrollo y el cambio ambiental (Carney, 1993; Rocheleau *et al*., 1996). Esta teorización reconoce el poder del patriarcado para equiparar a las mujeres con la naturaleza, pero también reconoce otras formas de opresión como el racismo, la desigualdad económica y la pobreza como significativas en la formación de la relación de las mujeres con el ambiente (Agarwal, 1992; Kabeer, 1994). Dado que a la ecología política feminista le preocupan las formas de análisis interculturales y trasnacionales, no se rige primordialmente por los análisis relacionados a la subordinación de las mujeres en las culturas occidentales. Rechaza la teoría de que las mujeres son biológicamente más cercanas a la naturaleza y, en cambio, argumenta que las interacciones entre lo humano y el ambiente se construyen socialmente y son

específicas a contextos geográficos e históricos. La relación de las mujeres con la tierra se mide a partir de saberes determinados por el género, relacionados con el ambiente y la agricultura, a partir del acceso determinado por el género a los recursos como la tierra y a partir de formas determinadas por el tipo de activismo político (Rocheleau *et al*., 1996).

La siguiente sección ofrece una breve visión de la agricultura alternativa como una práctica e ideología en el contexto estadounidense. Luego describe la crítica feminista a la agricultura alternativa y la investigación relevante en ecología política feminista dirigida a entender el trabajo de las mujeres en la agricultura orgánica a pequeña escala en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Concluyo con una discusión sobre la investigación sobre las mujeres en la agricultura sustentada por la comunidad y, posteriormente, discuto mi estudio de caso.

Desarrollando dicotomías en la agricultura americana

La agricultura alternativa es una ideología popular anclada en el auge del movimiento ecologista estadounidense a finales de las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx, el movimiento contracultural de la "vuelta a la tierra" y el populismo agrario de Wes Jackson y Wendell Berry (Belasco, 2007; Jackson *et al*., 1984), La agricultura alternativa también es una serie de técnicas y prácticas que brindan una alternativa al monocultivo a gran escala que depende de la compra de fertilizantes sintéticos, pesticidas y semillas híbridas. Wes Jackson y Wendell Berry (Jackson *et al*., 1984) popularizaron algunas ideas sobre una forma ecológicamente consciente de cultivar que idealizaba la granja estadounidense a pequeña escala. Su visión de la agricultura sostenible se orienta al comercio y al mercado, sostiene una economía rural y depende de consumidores urbanos (Berry, 1996). Tanto Jackson como Berry (Jackson *et al*., 1984) subrayan que esta agricultura familiar respeta el ecosistema y, de hecho, la propia granja puede percibirse como un ecosistema que sigue las leyes jerárquicas propias del lugar y exige técnicas específicas de cultivo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y la inclusión del ganado en el sistema agrícola. Esta filosofía holística concibió la granja como un sistema que unifica el lugar

y a las personas dentro de una comunidad localizada (Orr, 2004; Jackson *et al*., 1984; Vitek y Jackson, 1996). Los críticos de esta filosofía afirmaron que "esta suprime, de hecho, la importancia del contexto en la agencia humana: son personas que le hacen frente a la naturaleza desigual del cambio social y económico contemporáneo" (Arce y Marsden, 1993: 296). Esta crítica corre de forma paralela al desarrollo de la ecología política, que busca entender la transformación y el cambio agrario mediante la acción humana contextualizada en relación con la integración a la economía mundial de los agricultores a pequeña escala y las maneras paradójicas en las que el desarrollo económico profundizó el despojo, la vulnerabilidad y la marginalización en el Sur global (Blaikie, 1983; Peet y Watts, 1996). Los análisis desde la ecología política feminista de la agricultura alternativa en la década de los noventa apuntan a la exclusión de las mujeres en los análisis sobre quién participaba en la agricultura alternativa y por qué.

Por ejemplo, la reinterpretación que hace Wendel Berry del granjero jeffersoniano y de su vuelta a la tierra presupone identidades masculinas. La pequeña granja familiar era un constructo patriarcal (Fink, 1992: 193). Los críticos apuntaron a la omisión del género, la clase y la raza en los discursos sobre agricultura sostenible alternativa. Los estudios feministas capturaron la centralidad del género en la persistencia de las granjas familiares (Whatmore, 1991). Pero las mujeres que participaron en la agricultura alternativa eran en gran medida invisibles en la literatura académica y popular temprana dedicada a explicar y abogar por la agricultura alternativa como práctica y como discurso en oposición a los agronegocios y su énfasis en la eficiencia mediante la mecanización, las grandes cosechas de un solo cultivo y la gran escala.

Desde el principio se hizo evidente que la agricultura alternativa, como una serie de prácticas, así como una forma de vida, incorporaba una serie de valores que incluían cuidar del lugar y del ambiente. La agricultura alternativa como una serie de prácticas y como un movimiento social más amplio ha permitido que surja una ideología menos competitiva y menos individualista, vinculada a una conciencia ecológica global en aumento (Bartlett y Conger, 2004). Los hombres y las mujeres que practican la agricultura alternativa identifican valores similares, como la independencia y la autogestión (autosuficiencia), un compromiso con las granjas

a pequeña escala, y el aprovisionamiento de las comunidades locales de formas ecológica y socialmente responsables (Beus y Dunlap, 1990). Las mujeres también identifican la importancia de asuntos relativos a la calidad de vida, como son los placeres de trabajar al aire libre, así como las dimensiones espirituales que involucran sus relaciones con la naturaleza y con sus comunidades (Chiappe y Flora, 1998).

Liepins (1995) observa que las mujeres del movimiento de agricultura sostenible en Australia son movidas por una definición de la sostenibilidad que reestructura la práctica agrícola como algo más que una actividad económica y que destaca la contribución de las mujeres a la agricultura sostenible. Liepins (1998) examina el género en la agricultura y las políticas agrícolas en Australia y Nueva Zelanda y encuentra que las mujeres en la agricultura se construyen a sí mismas como mujeres de negocios, agricultoras y socias que subrayan el manejo de los recursos naturales, así como expresan su subjetividad en términos de maternidad y cuidado. Investigaciones más recientes centradas en Europa Occidental y Estados Unidos interrogan la noción monolítica de las agricultoras y empiezan a desentrañar la diversidad entre agricultoras que practican la agricultura alternativa en términos de biografías individuales, el tamaño de la granja y las prácticas empleadas (Trauger, 2004; Pedersen y Kjaergard, 2004).

Sachs (1996) se entrevistó con agricultoras orgánicas en California y descubrió que no había consenso sobre si el enfoque de la agricultura por parte de las mujeres era singularmente diferente al de los hombres. Gershuny (1991) descubrió que tanto los agricultores varones como las agricultoras orgánicas con que se entrevistó podían adoptar valores feministas y la visión de la agricultura orgánica como algo que trascendía los valores patriarcales, mientras que algunas mujeres explicaron su acercamiento a la agricultura orgánica como algo arraigado en la experiencia de las mujeres como madres. Pedersen y Kjaergard (2004) revelan que las mujeres tienen motivos muy diversos para dedicarse a la agricultura orgánica, y que no es posible definir a la agricultura orgánica como una categoría distintiva. Esta investigación teoriza que las identidades de género son dinámicas y que la agricultura alternativa reestructura las identidades masculinas y femeninas en un movimiento que reconoce la ética del cuidado como parte

de las identidades femeninas *y* masculinas en la agricultura alternativa (Wells y Gradwell, 2001; Liepins, 2000; Peter *et al*., 2000). Estas investigaciones revelan que la relación entre la agricultura alternativa y la práctica del cuidado es ambigua. Varía a través de un continuo determinado por el género de prácticas agrícolas y prácticas de cuidado y entre experiencias individuales. La agricultura sustentada por la comunidad se encuentra en un extremo de este continuo y está dominada por cultivadoras (Wells y Gradwell, 2001). La siguiente sección examina el papel de las mujeres en las csa para continuar enmarcando y situando mi estudio de caso.

Las mujeres en la agricultura sustentada por la comunidad

El concepto de agricultura sustentada (CSA) por la comunidad se originó en Suiza y Japón, y se extendió a zonas urbanas en Nueva Inglaterra, la región del Atlántico Medio, los Grandes Lagos y la Costa Oeste. La CSA se estructura y organiza de varias formas con una o varias granjas y mercados. Todas se dedican a apoyar a pequeños agricultores que practican la administración de la tierra, con técnicas de cultivo orgánico y que venden directamente a los consumidores, ya sea en la granja o en sitios fuera de ella (O'Hara y Stagl, 2001). Las mujeres juegan un papel importante como integrantes de las csa (DeLind y Ferguson, 1999; Cone y Myhre, 2000). Aunque la pertenencia a una CSA no se asemeja en nada a comprar comida en un supermercado o en un mercado de agricultores, hay quienes argumentan que pagar por un cultivo por adelantado no está fuera del capitalismo convencional (Goldblatt, 2004). Otros, ven las CSA como una alternativa al capitalismo convencional agrario porque brinda capital directo a los agricultores antes de la temporada de cultivo, aseguran un contacto directo entre agricultores y sus suscriptores y está por fuera de los circuitos de la agricultura industrial globalizada (Adam, 2002; Gibson-Graham, 2006). Los investigadores también postulan que a medida que una CSA crece aún más en términos de membresía y tamaño de las granjas, su estatus como alternativa podría diluirse o incluso desaparecer (Groh y McFadden, 2000; Stanford, 2006).

Las csa florecen en entornos metropolitanos, por su atractivo para los consumidores cultos y adinerados (Stanford, 2006). A pesar de sus metas y objetivos "alternativos", DeLind (1999) constata que las expectativas de los consumidores convencionales en cuanto a pautas de consumo y comodidad pueden ser tan importantes como su "alternatividad". Por ejemplo, aunque el objetivo sea la provisión de comida fresca, cultivada localmente, segura y nutritiva, algunos suscriptores se quejaron de tener demasiada comida o comida desconocida, pero no consideran pagar por la comida y luego compartir o regalar el excedente de comida recibida.

Asimismo, las csa brindan otra forma de producir y comprar comida, llevando a los consumidores a las granjas o entregando bolsas de productos agrícolas a edificios de oficinas en el centro de la ciudad, a centros de ancianos, o a sitios de entrega vecinales. Las csa responden a las necesidades de consumo de diferentes clases sociales mediante el desarrollo de programas para bajos ingresos que incluyen a personas que no pueden costear las tarifas de suscripción; son más populares entre los *baby boomers* y los alumnos universitarios, en especial entre mujeres blancas con educación (Hinrichs y Kremer, 2002).

La encuesta National csa Farm Survey de 1999 (Lass *et al*., 2003) indica una falta de diversidad étnica y racial entre los agricultores de las csa y observa que el ingreso medio bruto de la csa es de quince mil dólares, mientras que más de 60% de los agricultores de la csa encuestados reportaron menos de diez mil dólares en ingresos externos a la granja. Los estados con el mayor número de csa son Nueva York, California, Wisconsin, Massachusetts y Washington. Los agricultores de la csa tienen por lo general diez años menos que los agricultores encuestados por medio del Censo de Agricultura del Departamento Estadounidense; 95% han asistido o se han graduado de la universidad, son relativamente nuevos en la agricultura y son blancos en su gran mayoría. Según estos datos de encuesta, casi 40% de los principales agricultores de la csa son mujeres. Wells y Gradwell (2001) argumentan que valores como el cuidado y la alimentación están más fuertemente vinculados a la csa que a otros sistemas agrícolas. La csa desarticula dos dicotomías prominentes en la práctica agrícola y en las identidades de género. Desdibuja los límites entre la agricultura y la

jardinería, y entre la división de trabajo por género entre la agricultura (trabajo de hombres) y la jardinería (trabajo de mujeres).

A partir de una examinación de las csa propiedad de mujeres y gestionadas por ellas en mi estudio de caso, me interesa comprender cómo se construyen socialmente las interacciones de las mujeres con el ambiente mediante las prácticas de cultivo y las prácticas de cuidado. Investigaciones anteriores teorizan que la conceptualización de la csa es inherente a esta construcción (Wells y Gradwell, 2001). Mi objetivo es extender esta teorización al examinar las motivaciones de las mujeres que practican la csa en una región metropolitana para entender con mayor claridad cómo sus biografías y su raza y clase articulan sus interacciones con el ambiente por medio de la csa. ¿Cómo se negocian las prácticas de cuidado en relación con las motivaciones políticas, sociales y las prioridades económicas? Mientras me enfrento a estas preguntas, examino cómo la ecología política feminista podría enriquecerse por medio de un diálogo con la ética del cuidado.

Las mujeres en la agricultura alternativa: el caso de CSAs propiedad de mujeres en el estado de Washington

La agricultura sustentada por la comunidad en el estado de Washington se concentra en la costa occidental altamente urbanizada, en especial en la región noroeste del estado que engloba el estrecho de Puget y la zona metropolitana de Seattle. Esta región se distingue por sus políticas liberales, su riqueza relativa respecto al resto del estado de Washington, su población altamente educada y por la proliferación de mercados de agricultores y cultivos comunitarios. Es alta la demanda de frutas y verduras frescas cultivadas en la localidad. Los agricultores que viven a cientos de kilómetros de los mercados agrícolas de Seattle se desplazan para vender sus productos agrícolas en medio de la creciente demanda por alimentos cultivados localmente por parte de urbanitas acomodados y cultos (Qazi y Selfa, 2005). El clima templado de la región permite a los agricultores cultivar algunas verduras, como las lechugas, durante todo el año. Los Gobiernos estatales, municipales y de las ciudades promueven los mercados de agricultores facilitándoles espacios, participando en campañas de concienciación pú-

blica como Puget Sound Fresh y alentando los huertos comunitarios. Las organizaciones no gubernamentales como Seattle Tilth, Cascade Harvest Coalition y Skagitonians to Preserve Farmland también son activas en la promoción del acceso a alimentos frescos cultivados en las localidades, huertos urbanos, agricultura periurbana y sistemas alimentarios locales y sostenibles que incluyen la agricultura sustentada por la comunidad.

Mi estudio se enfoca en mujeres que producen y venden productos agrícolas frescos y de temporada por medio de la agricultura sustentada por la comunidad y los mercados de agricultores en una región metropolitana de Estados Unidos, donde una variedad de formas periurbanas de agricultura abunda en tensión con la urbanización y los procesos de gentrificación (Langston, 2002; Jarosz, 2008). Las CSA sirven a las comunidades rurales tanto como a las urbanas, dependiendo de la ubicación y el tamaño de la granja. Las mujeres activas en la CSA gozan de una buena educación y antecedentes profesionales, y luego transitan a comprar o rentar pequeñas parcelas de tierras de cultivo disponibles. Las mujeres blancas predominan en esta forma de agricultura, dentro de las cuales son las mujeres solteras las más dependientes de sus granjas como su fuente principal de ingresos. En las zonas metropolitanas, las mujeres a menudo pasan de un trabajo asalariado en las ciudades a convertirse en agricultoras, en vez de crecer como hijas de agricultores o convertirse en esposas de agricultores, aunque también hay mujeres en la producción agrícola orgánica que hacen eso. Como en otros estudios realizados en Europa Occidental (Pedersen y Kjaergard, 2004), las agricultoras en el cultivo alternativo viven modestamente, y algunas tuvieron problemas para cubrir sus gastos en años determinados y con cultivos particulares.

Del 2003 a 2006, me entrevisté con veinticuatro trabajadores de una red alternativa de alimentos enfocada en el área metropolitana de Seattle.[3] Estos hombres y mujeres están involucrados en la agricultura, la distribución y la venta de productos agrícolas frescos y de temporada que se venden en sedes alternativas en la región, que incluyen mercados

3 También visité mercados agrícolas, me involucré como suscriptora en la agricultura sustentada por la comunidad y me uní a varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a promocionar la conservación de tierras de cultivo y de la agricultura sostenible en la región. La observación participativa también es un método clave en este estudio.

agrícolas, cooperativas de comida y agricultura sustentada por la comunidad. Once de estas entrevistas de una hora, grabadas en audio, exhaustivas y semiestructuradas, fueron con agricultores, nueve de las cuales son mujeres. Seleccioné y recluté a estas participantes con base en un listado de granjas de *The Washington Tilth Producers Directory*. Es posible que este directorio no incluya a todos los cultivadores orgánicos a pequeña escala en el estado de Washington, pero es la lista más exhaustiva con que se cuenta.[4] La lista de granjas no se limita a granjas orgánicas certificadas; también incluye a cultivadores que no utilizan pesticidas, fertilizantes y hormonas de crecimiento sintéticas para el ganado, ni semillas genéticamente modificadas, pero que no están certificados como agricultores orgánicos por parte del estado de Washington ni el Departamento de Agricultura estadounidense. El directorio contiene las granjas que venden a proveedores, restaurantes, mayoristas e intermediarios, o cualquier combinación de estos receptores. En 2005, el Directorio ofrecía una lista de 151 granjas. En el ámbito del estado, las mujeres aparecen como dueñas o como codueñas de 105 de estas granjas. De las 81 granjas que aparecen en la región del estrecho de Puget (que engloba la zona urbanizada del oeste de Washington, abarcando del norte al sur en la costa del Pacífico e incluyendo diez condados), más de la mitad (52) tienen dueñas o codueñas. Más de 45% de estas granjas no están certificadas como orgánicas. En mis dos estudios de caso en el ámbito del condado, el condado de King County (Seattle es la gran ciudad del condado) tiene veintidós granjas.

4 Los agricultores que aparecen en este directorio varían año con año. Lo que distingue a este listado es que los agricultores se agrupan entre los que son certificados como orgánicos, no certificados como orgánicos, los que están en transición y los que son sostenibles. Las granjas certificadas como orgánicas son acreditadas por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington u alguna otra agencia acreditada por el Departamento de Agricultura estadounidense. Aquellos agricultores siguen prácticas orgánicas definidas bajo el Programa Orgánico Nacional y están exentos de la certificación si sus ventas son menores a cinco mil dólares. Las granjas en transición están en proceso de completar sus requisitos para certificación. Las granjas sostenibles utilizan controles de plagas, enfermedades y malezas que tienen un impacto mínimo en el ambiente, y también buscan ofrecer condiciones de trabajo humanas (*Washington Tilth Producers Directory*, 2007, p. 3). Este listado exhaustivo revela que una mayor cantidad de mujeres en la agricultura orgánica no están certificadas, y por tanto están subrepresentadas en las encuestas nacionales que destacan la certificación orgánica (como las encuestas de la Organic Farming Research Foundation).

Las mujeres operan casi tres cuartas partes de estas granjas. El condado de Skagit County, ubicado aproximadamente a sesenta millas al norte de Seattle, también es un condado metropolitano, pero tiene algunas de las tierras arables más fértiles y extensas y más cercanas a una gran región metropolitana del país. El condado de Skagit cuenta con dieciocho granjas activas en la agricultura alternativa; ocho con dueñas o codueñas y son operadas por mujeres.

Formulé una serie de preguntas abiertas a las agricultoras sobre qué las llevó a la csa, sus riesgos y recompensas, sus prácticas agrícolas y de mercado, y sus motivaciones para seguir cultivando. Los datos de cada entrevista se codificaron para temas comunes y recurrentes como motivaciones, autoidentificación, gestión y estructura de la csa y posibilidades futuras y retos, en concordancia con las normas de codificación de la investigación cualitativa (Cope, 2005).

Me centré en mujeres que son dueñas y operadoras únicas o que cultivan con otra pareja o esposo o esposa y cuyas granjas se dedican a la agricultura sustentada por la comunidad y a las ventas en mercados de agricultores. Mi objetivo es entender qué motiva a estas cultivadoras a empezar y a continuar con la agricultura y a contribuir a teorizar por qué las agricultoras participan en cultivos alternativos en zonas urbanas. Mi meta no es enumerar la cantidad de mujeres involucradas en la csa, sino a prestar atención en cómo las mujeres expresan sus motivaciones dentro del contexto de sus vidas cotidianas. Estas agricultoras difieren en edad, estado civil y origen, pero no en etnia. Todas son de ascendencia euroamericana; cinco tienen estudios universitarios. Las participantes tienen entre treinta y cincuenta y tantos años. Dos son solteras y sin hijos. Cinco llegaron a la agricultura por medio de la jardinería o haciendo una elección consciente como adultas, sin una historia familiar particular en la agricultura. Dos llevan décadas cultivando, otra está en su primer año cultivando, las demás llevan de tres a cinco años cultivando.

Estas agricultoras definen sus motivaciones para cultivar de cinco maneras distintas. Indico el número de mujeres que identifican estas

motivaciones en paréntesis y agrupar sus respuestas en orden de frecuencia. Las agricultoras identificaron más de un factor motivante:

1. Una elección de estilo de vida y una reorientación profesional (8).
2. Cultivar alimentos y alimentar a las personas (6).
3. Autosuficiencia económica e independencia (4).
4. Un compromiso social y político a favor de un sistema alimentario sostenible (4).
5. Una manera de educar a las personas sobre la alimentación y la agricultura (3).

Las mujeres eligieron la agricultura a pequeña escala por el estilo de vida que representa y porque querían redireccionar sus vidas profesionales hacia algo que amaban y consideraban más significativo para ellas en un momento particular de sus vidas. Estas decisiones y nuevas direcciones adoptan una variedad de formas. Pueden ser extensiones de compromisos continuos con el trabajo social y comunitario o pueden representar rupturas de trabajos que no satisfacen o que podrían no combinarse con cómo las mujeres desean llevar su maternidad. En los siguientes fragmentos de entrevistas, cuatro agricultoras hablan de cómo la agricultura encaja con sus elecciones de estilo de vida y nuevas profesiones:

> Me he encontrado con varios profesionales que conocí en la infancia que ahora trabajan en distintos tipos de agricultura. Creo que es una transición natural cuando llegas a un punto en el que necesitas un descanso de las necesidades humanas. Puedes hacer esa labor de alimentar con las plantas. Todo mundo debería tener la oportunidad de expresarse por medio de su trabajo en algo que es significativo y alegre e integral […] las personas llegan a mi puesto y me dicen estás brillando con salud y se nota que te encanta tu trabajo y es muy evidente […] todo eso es tan cierto, me siento tan bendecida y afortunada. A mí me parece que mientras más cultivo, el significado de mi trabajo cotidiano [en la organización comunitaria] simplemente ya no significa tanto. Trabajo con muchas asociaciones civiles y pensarías que eso sería significativo, porque muchas personas están

> haciendo buenas obras. Pero a fin de cuentas son los mismos problemas de organización de siempre y la disfunción de mesas directivas que no responden a sus responsabilidades, y estoy harta de eso. Desconectar no es fácil. Estaba pensando en cómo salir de esta rutina en la que parecía encontrarme, manteniendo un trabajo que no me satisfacía […] llevaba quince años trabajando [en contabilidad] y realmente quería salir de eso.

> La motivación de alimentarse a una misma a través de un cambio en estilo de vida y profesión está ligada a un amor por cultivar y alimentar. Esta motivación al inicio se puede expresar por medio de un amor por la jardinería que eclipsa el trabajo "de día". Alimentarse a una misma está profundamente vinculado con alimentar a otros a través de cultivar comida, que es parte de cambiar de trabajo y buscar una nueva forma de vivir y trabajar.

> Amo la comida, amo comer, y amo cocinar y cocinar con gente y compartir la comida y regalar comida y alimentar a la gente […] la vi [a la agricultura sustentada por la comunidad] más como una forma de obtener la mejor comida posible. Cuando hago salsa y abro un frasco de salsa que hice en julio y me doy cuenta de que está hecha de tomates, pimientos y ajo que yo cultivé, es tan emocionante. Es simplemente un producto que no puedes conseguir en ningún otro lado.

> Simplemente me gusta mucho la buena comida. Yo escojo lo que cultivo […] si sabe delicioso, debo cultivarlo […] Nuestras fresas salieron increíbles […] estoy ahí cuando vienen mis suscriptores a recoger, así que realmente es como dos veces a la semana que me toca ese beneficio de ver cuánto les encanta.

Estas agricultoras disfrutan de ver y conocer a sus clientes. Los ven no solo en sus granjas para recoger comida, sino también pueden verlos de compras alrededor del pueblo. Les gusta escuchar qué tanto se disfruta la comida que cultivan, así como les enorgullece la calidad y la singularidad de lo que cultivan y procesan para sus clientes y sus hogares. Sus motivaciones

vienen de producir buena comida para los demás —no solo para sus familias inmediatas, y en las relaciones sociales que se construyen por medio de la agricultura sustentada por la comunidad y la venta en mercados agrícolas—. Una agricultora describe cómo empezó a pensar en el cultivo de comida como trabajo y como una forma de vida después de ayudar a otros padres y personal escolar a crear un huerto escolar urbano:

> [En Ranier Valley en Seattle, un barrio con una población con diversidad étnica/racial y tasas de pobreza notables] los padres de una primaria recaudaron fondos y solicitaron becas para construir un huerto en las instalaciones de la escuela […] fue a partir de eso que realmente empecé a pensar más en cultivar comida […] básicamente estamos haciendo esto porque es el estilo de vida que queremos y así es como queremos ganarnos la vida. Contribuimos al sistema [de comida alternativa], educamos a la gente, ese tipo de cosas […] El cultivo a pequeña escala verdaderamente diversificado es tan difícil, pero tan bueno.

Para todas las mujeres, la agricultura alternativa a pequeña escala es una actividad que constituye un modo de vida, más que solo una forma de ganarse la vida. Las condiciones de esa elección varían mucho. Por ejemplo, una agricultora joven, soltera, explica cómo transitó del trabajo de oficina a tiempo completo en Seattle a operar su propia granja a tiempo completo:

> Pero parecía tener mucho más sentido […] hacer la ruptura que buscaba —salir del trabajo aburrido de oficina para nunca más tener que ponerme un traje y tacones y entregar mi CV en una entrevista de trabajo—. Simplemente no quería volver a hacer eso en mi vida. Quería cambiarlo todo. Dedicaba tanto tiempo y esfuerzo a ese huerto […] y solo contaba las horas en mi trabajo para volver al huerto a hacer lo que realmente me gustaba. Parecía tener mucho más sentido pensar la forma de hacer lo que realmente amaba.

Esta decisión involucra riesgo y cambio. Renunció a su trabajo en Seattle, se volvió aprendiz en una granja pequeña, con una propietaria mujer, en el condado Skagit y al final se mudó a un pueblito cerca de un parque nacional y empezó a cultivar en tierras alquiladas. Su diminuta CSA es su única fuente de ingreso.

Otra mujer detalla su decisión de transitar a la agricultura, en la que ha tenido éxito durante los últimos cuatro años, junto con empezar una familia:

> Mi licenciatura fue de ingeniería mecánica, así que hice eso durante cinco años y gané muchísimo dinero, lo cual fue genial, pero no me daba satisfacción. Y luego […] me convertí en maestra. Dar clases era genial. Me encantaba. Pero en realidad era uno de esos trabajos donde se trataba continuamente de dar, dar, dar. Yo daba, daba y daba y sabía que si quería tener hijos no podía dar clases y hacerlo porque los niños son niños, y soy demasiado egoísta como persona como para entregar todo todo el tiempo, así que elegí, tengo que renunciar a ser maestra. Y lo conocí [a mi esposo] al mismo tiempo, así que se dieron las cosas para tener una granja […] así que esto ha sido genial. Esto ha sido tan perfecto para mí. Me encanta. Y no sé durante cuánto tiempo lo haremos. Medio planeamos hacerlo por un buen tiempo […] y ahora me siento tan afortunada. Estamos en este pequeño paraíso.

Su pareja trabaja a tiempo completo en un cargo profesional en Seattle. Sus comentarios indican lo frágil que puede ser la agricultura alternativa. Los agricultores pueden entrar y salir de ella dependiendo de sus biografías individuales y el *burnout*. Pedersen y Kjaergard (2004) argumentan que atraer a más mujeres a la agricultura alternativa a pequeña escala es difícil debido al aumento de la competitividad que representa la agricultura orgánica industrializada. Mi investigación suplementa esta perspectiva demostrando que la fragilidad de la CSA también está afectada por la habilidad de las mujeres blancas, de clase media y con educación de entrar y salir de la agricultura en respuesta a los cambios en sus propias vidas y al hecho de que, como profesionales con educación, ellas y sus parejas pueden buscar otras oportunidades. Es un privilegio de su condición de clase media y de raza. Dentro de mi área de estudio, esto ha provocado que otros agricultores y proveedores agrícolas se refieran a ellos como "agricultores por *hobby*", por lo pequeño de la escala y por el hecho de que no todos dependen de los ingresos de la granja para su subsistencia.

Siete de las nueve mujeres con quienes me entrevisté llegaron a la agricultura a través de un amor por la jardinería. Una mujer que cultiva hortaliza

para ensalada durante los meses de invierno en su granja de un acre explica su decisión de cultivar como arraigada en cómo creció comiendo y viendo el huerto de su abuelo, aunque vivió en la ciudad de Nueva York durante veinte años antes de moverse al condado King County:

> Mis abuelos por parte de mi madre eran inmigrantes de Checoslovaquia y eran campesinos […] mi abuelo cultivaba de todo en su jardín trasero […] y cuando tenía 89 todavía me sacaba al huerto y se agachaba y sacaba una zanahoria y había un orgullo increíble alrededor de eso que, de alguna manera, no lo sé, resonó conmigo […] Además, sabes, disfruto comer y amo estar afuera todo el tiempo, me gusta el ambiente, amo a las personas que cultivan comida, simplemente siento un parentesco con ellos. Así que sabía que algún día realmente me gustaría ser agricultora.

Existe una reciprocidad involucrada en el trabajo de las mujeres en la CSA. Hay una motivación por alimentar a los demás y, al hacerlo, la agricultora a su vez es alimentada por medio de la relación social que se crea en el cultivar y comer alimentos. También se trata de tener un tipo de vida particular que involucra unir el cuidado, el cultivo y el lugar para construir una vida.

Estas granjas suplementan sus suministros de comida y brindan algún ingreso. Pero esta definición no se mantiene para todas las mujeres con que me entrevisté. Dos de ellas dependen solo de los ingresos de sus granjas. Ninguna de ellas tiene hijos, una es soltera y la otra tiene una pareja que trabaja fuera de la granja. Dos mujeres formaron una asociación para desarrollar sus granjas para que las apoyara económicamente y pudieran dejar sus "trabajos de día" en servicios sociales. Sus necesidades económicas están ligadas a circunstancias específicas e ideales en un momento particular en el transcurso de su vida. Por ejemplo, una agricultora soltera explica:

> Mi meta al vender lo que cultivo es seguir apoyando mi vida aquí y mis necesidades son tan pequeñas —no tengo deudas, mis gastos son mínimos— eso es en lo que pienso cuando pienso en cobrar por comida. Básicamente solo quiero cubrir mis gastos […] Estoy intentando pensar en cómo me puedo mantener, pero hacerlo de una forma que yo sienta que realmente es justa y equitativa.

A ninguna de las agricultoras les interesaba aumentar el tamaño de sus granjas para obtener más ingresos o cultivar más comida. Según una de las dos agricultoras que obtienen todos sus ingresos de sus granjas:

> Nunca duplicaría el tamaño, y he visto granjas que lo hacen, y yo soy más cautelosa con eso y probablemente es porque no me quiero tener que preocupar por eso todo el tiempo, quiero disfrutar de lo que hago.

Ninguna planeaba "ampliar" sus operaciones agrícolas, ya que ganar más dinero por medio de un aumento en el volumen o base clientelar no es la prioridad central. Como se indicó antes, las agricultoras asociaban el disfrute derivado de la agricultura como una profesión y un estilo de vida, como una consecuencia de la pequeña escala de sus granjas. Una agricultora sostiene que, dependiendo de la ubicación y la combinación de productos, las granjas pequeñas pueden ser tan lucrativas como las grandes:

> Cuando estaba en Bainbridge [isla] tenía tres parcelas de tierra distintas que en total abarcan menos de tres cuartos de un acre […] y yo ganaba 30, 35, esto sería en bruto, 30, 35, 40 000 en ese pequeño tamaño […] luego nuestros gastos no eran tantos, digo mi neto no es tan distinto de mi bruto porque básicamente eran tierras alquiladas […] pero creo que es posible a escala diminuta […] Si eres inteligente y encuentras los nichos adecuados para que te vaya mejor que a la escala media, digamos 5-10 acres, realmente lo creo.

Las parejas hombres y los novios no son necesariamente entusiastas del involucramiento de estas mujeres en la agricultura. Una activista/agricultora explica: "Tengo un esposo que me apoya mucho en cuanto a lo político. En realidad le gustaría deshacerse de la granja [...] sería el más feliz si solo fuera activista y tuviera un huerto, eso sería suficiente".

Su esposo sabe cuán duro y cuántas horas trabaja, y siente que los ingresos de la granja no justifican la gran cantidad de esfuerzo y preocupación. Pero esta agricultora obtiene una profunda satisfacción de su trabajo, de entrenar a los aprendices y de sus conexiones con la red de comida alternativa. Es muy

conocida y respetada en la comunidad agrícola, y entre defensores urbanos de la agricultura periurbana a pequeña escala.

Hacer catsup y salsa con los tomates que cultivaba una oficinista reconvertida en agricultora provocó el desdén de su novio: "Mi novio de aquel entonces se burló de mí y me llamó ama de casa. Lo dijo de una forma poco halagadora, ¡pero en realidad era verdad! Cuando veo mi vida ahora, la he diseñado a modo para tener mi vida ideal. Estoy haciendo lo que quiero hacer —eso significa cultivar alimentos—".

Contribuir al desarrollo de una red alternativa de comida cultivando alimentos es político y ético (Sage, 2003; Wells y Gradwell, 2001). Es un rechazo a la agricultura globalizada, industrial, a gran escala que mercantiliza la comida.[5] Esta agricultora no glorifica la agricultura a pequeña escala. Es un trabajo duro y las recompensas económicas son modestas. Pero las motivaciones para cultivar no son principalmente económicas y engloban las relaciones sociales, la ética del cuidado de la tierra y una alternativa a la comida comercial. En un caso, las amistades y suscriptores trabajan en la granja, en especial durante el ciclo de la cosecha, de modo que la comida y el trabajo se intercambian de forma directa.

Las agricultoras vocalizan razones explícitamente políticas como impulsoras de su deseo de seguir cultivando. Una propietaria de granja involucrada en la CSA que vende en mercados agrícolas y es reconocida en la región como líder en la agricultura alternativa dice:

> A menudo me motiva la indignación. No ha sido una elección para mí desde que me empecé a preocupar por la comida […] seguimos presionando y creo que la gente está aceptando que este banco de tres patas [la agricultura sostenible] es económicamente viable, ecológicamente sólido y socialmente justo. No es una posición fácil y hay una cantidad de gente [agricultores] que están cerrando sus negocios.

5 Investigaciones recientes apuntan a la variedad y al carácter híbrido de las redes de comida, así como a los límites porosos entre las redes de comida convencionales y alternativas (Maxey, 2007). Yo sostengo que estos límites son más pronunciados en los ejemplos de las csa y ubicadas en urbes.

Esta agricultora posee una granja de doce acres y es una líder política ampliamente reconocida que busca reestructurar la red alimentaria. Está comprometida con la red regional alternativa de alimentos, pero también reconoce lo difícil que es esta forma de cultivar debido a sus exigencias laborales, modestos ingresos y otras frustraciones. Por ejemplo, dice:

> [Este año] falló mi cosecha de cebolla y mi calabaza tuvo millones de problemas. Cuando saque cuentas este año, no sé con qué me encontraré […] cuatro personas trabajan para nosotros. Se requieren dos para mantener el vivero, se requieren dos para mantener las frutas y verduras, y luego estoy yo. Yo no llevo muy bien la cuenta de mi tiempo, así que no sé realmente donde se va todo. Pero mucho se va en manejar a las personas —lidiar con los mercados, lidiar con los trabajadores, mantener el equipo en funcionamiento—.

Brindar una conexión con la tierra a las personas urbanas y enseñarles de dónde viene su comida y las condiciones en las que se produce también son motivaciones muy importantes para las agricultoras. Una empleada a tiempo completo en el servicio social y agricultura orgánica a pequeña escala a media jornada describe su CSA como un compromiso educativo:

> Nos dimos cuenta de que hay muchas personas que viven en la [zona] urbana y que están hambrientos de ese tipo de conexión con la tierra y sentimos que les estamos dando algo de eso.

Ella y otra mujer compraron una pequeña granja a una hora y poco en coche de Seattle. Su granja brinda una manera de educar a las personas y brinda una conexión al ambiente por medio de la participación en actividades de cosecha. Dos agricultoras observaron que las personas carecían de las habilidades para cocinar las verduras que se dan bien en el noroeste del Pacífico. Parte de sus esfuerzos educativos se dedican a las habilidades de cocina y a cómo cocinar los alimentos que cultivan:

> Me he dado cuenta de que la gente no sabe cocinar. Así que muchas de nuestras noticias se centran en ofrecer instrucciones de cómo cocinar las verduras"

Las motivaciones de estas agricultoras para cultivar giran en torno a su deseo de construir y mantener unas relaciones sociales que vayan más allá de sus hogares, familiares y seres queridos para alimentar a la gente a su alrededor. Expresan estas relaciones en términos de alimentación, afecto y cuidado, además de como relaciones de intercambio o, en algunos casos, de trueque.

Las agricultoras expresan su motivación en términos de autocuidado —cómo quieren vivir sus vidas—. Las motivaciones individuales están muy diferenciadas y pueden surgir de circunstancias personales como convertirse en madres y querer combinar el trabajo y la vida familiar, alejarse de un trabajo alienante en la ciudad o llevar a la acción ideas sobre la política de los alimentos produciendo comida de cierta forma, a cierta escala e interactuando directamente con los consumidores de la comida. La vida se vive con total conciencia política y la acción desempeñada implica elegir un trabajo duro que paga poco, aun cuando el apoyo alentador de sus parejas no necesariamente llega. El empleo fuera de la granja por parte de individuos o sus parejas a menudo es clave para el apoyo de sus granjas, pero no condiciona por sí solo la elección en todos los casos, en particular en el caso de mujeres solteras sin hijos. Esta ética del cuidado toma forma según la posición de clase en tanto que es posible subordinar las prioridades económicas al elegir un modo de subsistencia y estilo de vida.

Este estudio de caso confirma hallazgos anteriores que indicaban que no hay una agricultura orgánica generalizable, monolítica, aunque en este caso las mujeres se encuentran unidas en cuanto a sus posiciones étnicas y económicas. Sus motivaciones para cultivar difieren según sus biografías, pero tienen en común sus motivaciones para construir relaciones sociales por medio de alimentar a las personas, cuidar el ambiente y contribuir al desarrollo de redes de comida sostenible a pequeña escala. Todas hablan desde la posición de la clase media, ya que todas han tenido una buena educación y la mayoría dependen de empleos fuera de la granja para suplementar el ingreso de la granja. La viabilidad económica y la capacidad de cuidarse a sí mismas y a otros se negocia sobre todo según la disponibilidad de asistentes universitarios que puedan ayudar con la práctica agrícola. Esta ayuda extra también es importante para mujeres

que activamente crían niños pequeños. Como observa una agricultura: "Sin los asistentes, solo estaría trabajando todo el tiempo. Para nosotros, los asistentes son un gran componente".

La siguiente sección esboza la investigación en la ética de cuidados feminista y la articulación de Foucault del autocuidado con la práctica de la libertad. De ahí, vinculo estas teorizaciones con las definiciones de Gibson-Graham de las políticas poscapitalistas para traer la investigación en la ética de cuidados feminista en conversación con la ecología política. Al ubicar esta literatura en relación con este caso de estudio, sostengo que una ética del cuidado subyace las motivaciones de las mujeres para practicar la agricultura alternativa y que esta ética es profundamente transformadora tanto en lo personal como en lo político.

Hacia una ecología política feminista de las éticas del cuidado

El cuidado es parte de la vida cotidiana; damos y recibimos cuidados a lo largo de nuestros caminos de vida desde la infancia hasta la vejez (Tronto, 1993). Las sociedades también son juzgadas moralmente por sus capacidades y acciones para cuidar a sus residentes más vulnerables a medida que avanzan en el curso de su vida y también en medio de crisis como los huracanes y la guerra. Por lo general, cuidar se definió restrictivamente y se confinó a espacios privados determinados por el género en el hogar o se le concibió en términos del estado de bienestar o de entornos institucionales como guarderías y asilos de ancianos (Tronto, 1993). A pesar de que cuidar a otros es una actividad básica a lo largo de nuestras vidas e informa nuestras expectativas del papel de los Gobiernos en relación con sus ciudadanos, el cuidado no ocupa un papel central en las discusiones sobre ética, con excepción de las discusiones sobre el trabajo informadas por la teoría feminista (Tronto, 1993; Clement, 1996; Wells y Gradwell, 2001).

El cuidado es social y relacional y está profundamente ligado al involucramiento y la acción guiadas por un sentido de responsabilidad política. La ética del cuidado no está restringida en los espacios a las agencias de gobierno, las instituciones o el hogar; informa la política y el desempeño

de una pluralidad diversa de mercados. Al examinar cómo el cuidado de otros se relaciona con la ciudadanía democrática y la realización de políticas sociales que propugnan la centralidad de dar y recibir cuidados, los investigadores transitan hacia teorizaciones y aplicaciones de la ética del cuidado que van más allá de lo personal, al mundo de las políticas públicas, la política y la economía (Sevenhuijsen, 2000; Daly, 2000; Morgan y Sonnino, 2008).

Cuidar y "preocuparse por" implica compromiso y acción (Tronto, 1993: 102). Por ejemplo, si me preocupo por la procedencia de los alimentos y las condiciones en las que se producen, estoy diciendo que estoy más que superficialmente interesada en la proveniencia de lo que como. Preocuparme por lo que como de esta forma va más allá de los precios, los detalles nutricionales y el gusto como límites morales. La moral no está limitada por el mercado y los hábitos de consumo de un individuo autónomo. Dado que la ética del cuidado es relacional y social por definición, la ética del cuidado exige un compromiso con la economía y la ecología política de lo que como. Esto podría significar que trabajo para conservar la tierra de cultivo de granjas orgánicas a pequeña escala cerca de mi ciudad, que me inscribo en la agricultura sustentada por la comunidad o incluso que empiezo un huerto o trabajo para eliminar el hambre en mi comunidad y alrededor del mundo. Los límites morales del cuidado se extienden más allá de los espacios del hogar (e.g., Lawson, 2007). Por tanto, la ética del cuidado también podría significar, por ejemplo, contribuir a los esfuerzos de organizaciones transnacionales como la Vía Campesina y a Trabajadores Rurales Sin Tierra para trabajar a favor de la justicia social y ambiental para personas campesinas y agricultores de pequeña escala alrededor del mundo, haciendo oposición en palabra y acción a los enormes subsidios otorgados al agronegocio por el US Farm Bill, o apoyando los esfuerzos de trabajadores de campo migrantes para obtener justicia social y económica. No hay límite a las formas de otorgar cuidado en todas las escalas.

Cuidar puede ser trabajo pagado o no pagado. Dado que trabajar en el cuidar está subvalorado en la sociedad estadounidense y por lo regular se le asocia al trabajo femenino (a modo de ejemplo, piensen en los bajos sueldos que reciben quienes cuidan de niños y ancianos), examinar el

poder en las relaciones sociales del cuidar puede revelar cómo el cuidar reproduce y extiende formas de desigualdad social (Tronto, 1993). Por ejemplo, trabajadores migrantes con bajos sueldos a menudo llenan los puestos de cuidado para quienes pueden pagar para recibir su cuidado, ya sea para ellos mismos o para miembros de sus familias.

Los trabajadores pueden ganar dinero por medio de actividades de cuidados, pero el dinero podría no ser la motivación central o distinta de la vida, el ser y las relaciones con otros (Radin, 1996). Los trabajadores pueden experimentar su trabajo como algo distinto de ellos mismos y sus "vidas reales". Esperan sus fines de semana en los que pueden "vivir" de verdad. Las observaciones de Radin (1996) de que el trabajo pagado y los sueldos que genera no necesariamente significa que la mercantilización del trabajo de cuidados lo drena de sus dimensiones éticas y relacionales. Pero eso subraya cómo los poderosos pueden exigir cuidados de aquellos con menos poder por medio de su posición en los ejes de raza, clase, etnia, género y ciudadanía.

La ética del cuidado "cuestiona los principios (neo)liberales de individualismo, igualitarismo, universalismo y de una sociedad organizada exclusivamente en torno a principios de eficiencia, competencia y de darle el precio 'correcto' a todo" (Lawson, 2007: 3). Esto resuena con un postulado ético central de la obra de Karl Polanyi (1944): está mal tratar a la naturaleza y a los seres humanos como objetos cuyo valor solo está determinado por el mercado.

Cuidar a otros es una forma de participación y acción relacional, pero cuidar a otros necesariamente está precedido por el autocuidado. Los individuos no pueden cuidar en efecto a otros sin primero cuidar de sí mismos. Foucault (1988) define el cuidado propio como conocerse a sí mismo para mejorar y superar el yo. Para Foucault, el yo se vuelve autónomo y libre por medio de un estilo de vida, una forma de vivir y pensar que culmina en la solidaridad humana y no surge de ninguna esencia o interiorización humana. El yo liberado se dedica a la "responsabilidad radical en el mundo" (Benauer y Mahon, 1994: 142). Esta responsabilidad es la de transgredir cualquier límite que constriña la autocreación completa y liberadora, en solidaridad con los otros. Cuidar al yo por medio de una decisión consciente de mejorar ese yo mediante una forma de vivir y pensar que esté en solidaridad con

los demás es una práctica deliberada de libertad. Uno establece autoridad y control sobre sí mismo al cuidar de y trabajar en el yo. Además, al practicar el autocuidado, uno siempre está cuidando adecuadamente de los demás, porque la relación con y responsabilidad hacia los otros es la ética central del autocuidado.

Las agricultoras en este estudio de caso expresan esta ética del autocuidado al hablar de las razones por las que empezaron a cultivar y participar en la agricultura sustentada por la comunidad. El trabajo en el campo es autocuidado en tanto que es una forma de dar y pensar que es un modo de autocreación, pero que también implica una responsabilidad con los demás en el mundo por medio de la alimentación del ser y de quienes compran y comen la comida que cultiva cada agricultora. La agricultura como autocuidado nutre el alma al brindar una vida-trabajo que es profundamente significativa por medio del autocuidado. La definición de Foucault del autocuidado como libertad y como responsabilidad radical hacia los demás se aleja de la idea del autocuidado como algo que mira hacia adentro. El cuidado hacia los demás está ligado al autocuidado de formas que son políticas y transgresoras y no esencialmente femeninas o normativas. Esta ética del cuidado no brota de una relación "especial" que las mujeres tienen con la naturaleza, por ejemplo, sino que emerge de un deseo consciente de vivir y pensar de tal forma que mejora tanto al individuo como las vidas de los demás, además de ser ecológicamente consciente. No sostengo que las agricultoras sean más propensas que los hombres a relacionarse de esta manera con la agricultura. Pero la cantidad cada vez mayor de mujeres que trabajan en la agricultura orgánica a pequeña escala y en la agricultura sustentada por la comunidad sugiere que el género podría ser importante para entender las motivaciones de la agricultura de algunas mujeres y, desde luego, para algunos hombres (véase también Trauger *et al*., 2010).

La ecología política feminista se ha preocupado por el activismo social de las mujeres y las responsabilidades hacia los demás y con la naturaleza, y no ha sugerido la idea de que cuidar a otros o al ambiente sea una actividad esencialmente femenina (Rocheleau *et al*., 1996). Discusiones sobre ética dentro de la ecología política han lidiado de manera más general con la ética normativa y cuestionan la relevancia de la ética del cuidado de Foucault para este campo. La ética de cuidado de Foucault ofrece una base

conceptual para este estudio de caso de las motivaciones de las mujeres en la agricultura sustentada por la comunidad. Un compromiso con los movimientos sociales o el activismo político no es la principal fuerza motivadora. Es el deseo de vivir una vida-trabajo que sea profundamente satisfactoria y significativa y que se lleva a cabo alimentando al ser y a los demás.

Alimentando las economías comunitarias

Para Gibson-Graham (2006: XVIII), la ética "implica las prácticas corporeizadas que llevan los principios a la acción". Las agricultoras en este estudio de caso articulan principios arraigados en sus prácticas agrícolas cotidianas y que dan forma a sus motivaciones para cultivar. Para ellas es importante alimentar a las personas, no solo a las que habitan en sus hogares, sino también a aquellas que viven en ciudades y pueblos cercanos. Estas decisiones están profundamente ligadas a sus biografías y van más allá de ganarse la vida ganando dinero. Al alimentar a sus familias, también alimentan la tierra y, lo que quizá sea más importante, es que se alimentan a sí mismas. Cultivar de esta forma es una praxis ética e inherentemente social y, por tanto, forma parte de un proceso más grande que Gibson-Graham (2006: 87-8) define como "resocializar y repolitizar la economía". Repolitizar la economía significa desafiar el capitalismo como necesario y como "la forma dominante (o identidad) naturalmente dominante de la economía" (Gibson-Graham, 2006: 54). Las mujeres en la agricultura alternativa participan en una economía de trueque, de csa y de mercados agrícolas. Sus principales motivaciones no son económicas, sino tienen que ver con objetivos sociales y con deseos de vivir sus vidas y hacer su trabajo de una determinada manera, así como con los objetivos políticos de contribuir tanto a la concienciación como a las posibilidades de crear una red de alimentaria alternativa que no esté motivada de forma principal por el capitalismo industrial a gran escala. Sus ingresos son modestos y ninguna tiene el deseo de "ampliar" sus granjas para ganar más dinero. Para ellas es importante que quienes consuman sus alimentos sean sus vecinos y conocidos, no solo clientes. Algunas regalan alimentos a vecinos y comedores comunitarios. Al practicar el trueque, desde la

agricultura sustentada por la comunidad y los mercados agrícolas, estas mujeres practican formas de lo que Gibson-Graham (2006) define como una economía comunitaria, la cual no tiene esquemas y normas preceptivas, sino que siempre está en proceso de conversión mediante relaciones materiales y sociales que hacen hincapié en las relaciones sociales basadas en el cuidado mutuo (Gibson-Graham, 2005).

Como observó una agricultora de cincuenta años:

> Somos […] lo bastante pequeños como para producir tanto como quisiéramos para alimentar a más personas. Conozco a todos nuestros clientes. Me saludan en la calle o me los encuentro en la tienda […] Nuestros clientes son siempre bienvenidos en la granja para visitar y hablar con nosotros de lo que estamos haciendo. Nunca voy a crecer lo suficiente, la única razón por la que lo [haríamos] sería para vender el excedente a una cadena de supermercados, pero nunca lo haríamos, así que no tiene sentido.

Las éticas del cuidado son evidentes en las motivaciones de estas agricultoras e indican una distinción entre mercados de comida en los que el cuidado es más importante que el volumen, el tamaño de las cosechas y las ganancias (véase Smith, 2005). Held (2002) argumenta que esta ética se extiende tanto a la esfera pública como al mercado. La CSA y los agricultores activos en la agricultura alternativa ejemplifican la extensión de esta ética a las esferas públicas y privadas del cultivo y el consumo de comida, y brindan una alternativa dinámica a las formas convencionales de comprar comida.

Los agricultores pueden posicionar y definir su negocio por medio de discursos de una política poscapitalista como una estrategia de mercadeo para llegar a los consumidores críticos de la globalización de la comida y la economía neoliberal. Los agricultores podrían usar discursos sobre el cuidar para posicionar y distinguir sus productos relativamente frente a los demás dentro de la economía de mercado (véase Guthman, 2004, sobre la importancia del posicionamiento de mercado) mientras practican una ética del autocuidado. Se puede argumentar que la agricultura alternativa y las CSA están insertadas en relaciones de mercado capitalistas (DeLind,

2002; Hinrichs, 2000). Mientras que todas menos una de las agricultoras en mi estudio, dependen del mercado para su subsistencia, sus motivaciones para cultivar y sus discursos sobre políticas poscapitalistas subrayan cómo el proyecto de construir economías comunitarias surge de un reconocido "espacio de interdependencia social y autoformación" que se realiza y construye desde y sobre las economías capitalistas (Gibson-Graham, 2006: 166). Las políticas poscapitalistas son marcos de posibilidad económica al servicio de transformar y construir nuevas economías que podrían articularse con las formaciones capitalistas y de mercado, incluso al tiempo que los discursos y prácticas constituyen el proceso contingente y disparejo que desafía y trasciende las relaciones capitalistas ancladas solo en objetivos de ganancia y acumulación. En este caso, las políticas capitalistas y poscapitalistas se encuentran en tensión.

Tanto la agricultura industrial a gran escala como la alternativa a pequeña escala dependen del trabajo asalariado mal pagado, trabajo no pagado de parientes o de aprendices, pasantes y amistades. Los hogares agricultores dependen de sueldos externos a la granja para suplementar los ingresos modestos de la granja. Sin embargo, es notable que una cantidad cada vez mayor de mujeres en Europa Occidental, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda eligen cultivar de esta manera porque responde a su ética y sus valores, y brinda el tipo de equilibrio trabajo-vida que buscan, teniendo en cuenta sus contextos urbanos y posiciones de clase.

Conclusión

A lo largo de la historia la ecología política ha propugnado la importancia ética de considerar los problemas de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en relación con las políticas y economías del cambio ambiental (Bryant y Jarosz, 2004). Este abordaje ha empleado el concepto de la economía moral a la hora de considerar cuestiones de despojo, acceso desigual y distribución de los recursos. La economía moral subraya las relaciones recíprocas de los derechos y responsabilidades entre miembros de una determinada comunidad o grupo (Neumann, 1998). Robbins y Sharp (2003: 444) le llaman a esto "una cultura compartida del bienestar colectivo". Peet y Watts

(1996) identifican el potencial liberador de la ecología política por medio de movimientos sociales y una variedad de temas. Uno de estos temas se centra en un sentido de identidad colectiva que se estructura mediante la comunalidad del lugar o del ambiente (Peet y Watts, 1996: 35).

Este estudio revela que el trabajo de cuidar y la ética del cuidado puede contribuir a consideraciones éticas en la ecología política enfocando la atención en aquellos individuos de clase media y grupos involucrados en el autocuidado y el trabajo de cuidados que contribuye a la construcción de economías comunitarias poscapitalistas. En segundo lugar, el estudio revela la importancia de examinar la articulación de la experiencia y la posición de los sujetos. Es decir, que producimos nuestras subjetividades por medio de las interconexiones de nuestras experiencias de vida y según nuestra posición dentro de las trayectorias de cambio de la política, la historia, lo ecológico y lo cultural. Parto de la definición de Gramsci de articulación como un conocerse a uno mismo como un ser continuamente producido por procesos históricos. Esto significa que "cada individuo es la síntesis no sólo de relaciones existentes, sino de la historia de estas relaciones" (Rutherford, 1990: 19-20). Este estudio de caso muestra justo esta formación identitaria como articulada por medio de los procesos de formaciones políticas y de clase dentro de un contexto urbano, políticamente progresista, que aglutina la agricultura urbana con las políticas de alimentación y del cuidado.

El concepto de ambivalencia de Judith Butler (1997) como el "proceso por medio del cual el sujeto es tanto un producto como una resistencia ante la subordinación" es de particular ayuda para explicar la posición de estas agricultoras. Sus pequeñas granjas pueden ser descartadas como "granjas por pasatiempo" o "huertos" o "elecciones de estilo de vida" porque no proporcionan la mayor parte de los ingresos del hogar, mientras que las agricultoras mismas pueden ser etiquetadas como amas de casa porque permanecen en casa con sus hijos y están involucradas principalmente en trabajos de cuidados. Sin embargo, como espero haber demostrado, su trabajo y sus motivaciones subyacentes también pueden definirse como éticas de autocuidado corporeizadas y liberadoras que contribuyen a alimentar a otros en el sentido foucaultiano de responsabilidad radical con los demás.

Reconocimientos

El financiamiento para esta investigación proviene de la University of Washington Royalty Research Fund y una beca de la USDA-NRI Agricultural Systems 2001-35209-10174. Me gustaría agradecer a Joan Qazi, Ray Jussaume y Theresa Selfa por colaborar en asuntos agrarios en el estado de Washington; a Caroline Faria por su excelsa asistencia de investigación y a Vicky Lawson y Craig Jeffrey por sus reveladores y útiles comentarios a versiones anteriores. Sus comentarios constructivos y útiles y las sugerencias de Beverley Mullings y de tres revisores anónimos también se agradecen.

Referencias

Adam, K. L. (2002). *Community supported agriculture. Appropriate technology transfer for rural areas,* National Center for Appropriate Technology, US Department of Agriculture. http:// www.attra.ncat.org

Agarwal, B. (1992). The gender and environment debate: lessons from India. *Feminist Studies*, *18*(1), 119-158.

Arce, A. y T. K. Marsden. (1993). Social construction of international food: a new research agenda. *Economic Geography*, *69*, 293-311.

Bartlett, P. F. y K. J. Conger. (2004). Three visions of masculine success on American farms. *Men and masculinities*, *7*(2), 205-227.

Belasco, W. J. (2007). *Appetite for change: how the counterculture took on the food industry*. Segunda edición. Cornell University Press.

Benauer, J. W. y M. Mahon. (1994). The ethics of Michel Foucault. En G. Gutting (ed.), *The Cambridge companion to Foucault* (141-158). Cambridge University Press.

Berry, W. (1996). Conserving communities. En W. Vitek y W. Jackson (coords.), *Rooted in the land: essays on community and place* (76-84). Yale University Press.

Beus, C. E. y R. E. Dunlap. (1990). Conventional versus alternative agriculture: the paradigmatic roots of the debate. *Rural Sociology*, *55*, 590-616.

Blaikie, P. (1983). *The political economy of soil erosion*. Wiley.

Bryant, R. y L. Jarosz. (2004). Introduction: Thinking about ethics in political ecology. *Political Geography*, *23*, 807-812.

Buckingham, S. (2005). Women (re)construct the plot: the regen(d)eration of urban food growing. *Area*, *37*(2), 171-179.

Butler, J. (1997). *The psychic life of power*. Stanford University Press.

Canadá. (2001). *Census of agriculture*. http://www.statcan.ca/english/agcensus2001/first/profiles/08female.htm

Carney, J. (1993). Converting the wetlands, engendering the environment: the intersection of gender and agrarian change in The Gambia. *Economic Geography*, *69*(4), 329-348.

Chiappe, M. B. y C. B. Flora. (1998). Gendered elements of the alternative agriculture paradigma. *Rural Sociology*, *63*(3), 372-393.

Clement, G. (1996). *Care, autonomy, and justice: feminism and the ethic of care*. Westview Press.

Cone, C. A. y A. Myhre. (2000). Community-supported agriculture: a sustainable alternative to industrial agriculture? *Human Organization*, *59*(2), 187-197.

Cope, M. (2005). Coding qualitative data. En I. Hay (coord.), *Qualitative research methods in human geography* (223-233). Oxford University Press.

Daly, M. (2002). Care as a good for social policy. *Journal of Social Policy*, *33*, 27-48.

Davies, B., J. Browne, S. Gannon, L. Hopkins, H. McCann y M. Wihlborg. (2006). Constituting the feminist subject in poststructuralist discourse. *Feminism and Psychology*, *16*(1), 87-103.

DeLind, L. B. (1999). Close encounters with a csa: the reflections of a bruised and somewhat wiser anthropologist. *Agriculture and Human Values*, *61*(1), 3-9.

DeLind, L. B. (2002). Place, work and civil agriculture. *Agriculture and Human Values*, *19*(3), 217–24.

DeLind, L. B. y A. E. Ferguson. (2000). Is this a women's movement? The relationship of gender to community-supported agriculture in Michigan. *Human Organization*, *58*(2), 190-200.

Fink, D. (1992). *Agrarian women: wives and mothers in rural Nebraska, 1880-1940*. University of North Carolina Press.

Foucault, M. (1988). The ethic of care for the self as a practice of freedom. En J. Bernauer y D. Rasmussen (coords.). *The final Foucault* (1-20). MIT Press.

Gershuny, G. (1991). Women in alternative agriculture. *Organic Farmer*, *2*(3), 5-21.

Gibson-Graham, J. K. (2005). Building community economies: women and the politics of place. En W. Harcourt y A. Escobar (coords.), *Women and the politics of place* (130-157). Kumarian Press.

Gibson-Graham, J. K. (2006). *A post-capitalist politics*. University of Minnesota Press.

Goldblatt, J. (marzo 7, 2004). How to keep them down on the farm. *The New York Times*. Sección 14NS.

Groh, T. y S. McFadden. (2000). *Farms of tomorrow revisited*. Biodynamic Farming and Gardening Association.

Guthman, J. (2004). *Agrarian dreams*. University of California Press.

Held, V. (2002). Care and the extension of markets. Part 1 of 2. *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*, *71*(2), 19-33.

Hinrichs, C. (2000). Embeddedness and local food systems. *Journal of Rural Studies*, *16*(3), 295-303.

Hinrichs, C. y K. Kremer. (2002). Social inclusion in a Midwest local food system project. *Journal of Poverty*, *6*(1), 65-90.

Jackson, W., W. Berry y B. Colman. (1984). *Meeting the expectations of the land: essays in sustainable agriculture and stewardship*. Northpoint Press.

Jarosz, L. (2008). The city in the country: growing alternative food networks in metropolitan areas. *Journal of Rural Studies*, *24*, 231-244.

Kabeer, N. (1994). *Reversed realities: gender hierarchies in development thought*. Verso.

Kingsolver, B. (2007). *Animal, vegetable, miracle: a year of food life*. Harper Collins.

Langston, J. (2002). *Cities, farmers feel hemmed in by urban growth limits*. Post-Intelligencer.

Lass, D., G. W. Stevenson, J. Hendrickson y K. Ruhf. (2003). *csa across the nation: findings from the 1999 csa survey*. Center for Integrated Agricultural Systems, University of Wisconsin-Madison. http://www.wisc.edu/cias

Lawson, V. (2007). Geographies of care and responsibility. *Annals of the Association of American Geographers*, *97*(1), 1-11.

Liepins, R. (1995). Women in agriculture: advocates for a gendered sustainable agriculture. *Australian Geographer*, *26*(2), 118-126.

Liepins, R. (1998). "Women of broad vision": nature and gender in the environmental activism of Australia's Women in Agriculture movement. *Environment and Planning A*, *30*, 1179-1196.

Liepins, R. (2000). Making men: the construction and representation of agriculture-based masculinities in Australia and New Zealand. *Rural Sociology*, *65*(4), 605-620.

Maxey, L. (2007). From "alternative" to "sustainable" food. En D. Maye, L. Holloway y M. Kneafsey (coords.), *Alternative food geographies* (55-76). Elsevier.

Morgan, K. y R. Sonnino. (2008). *The school food revolution*. Earthscan.

Neumann, R. (1998). *Imposing wilderness*. University of California Press.

O'Hara, S. y S. Stagl. (2001). Global food markets and their local alternatives: a socio-ecological economic perspective. *Population and Environment*, *22*(6), 533-554.

Orr, D. W. (2004). *The last refuge*. Island Press.

Pedersen, K. B. y B. Kjaergard. (2004). Do we have room for shining eyes and cows as comrades? Gender perspectives on organic farming in Denmark. *Sociologia Ruralis*, *44*(4), 373-394.

Peet, R. y M. Watts (eds.). (1996). *Liberation ecologies: environment, develoment, social movements*. Routledge.

Peter, G., M. M. Bell, S. Jarnagin y D. Bauer. (2000). Coming back across the fence: masculinity and the transition to sustainable agriculture. *Rural Sociology*, *65*(2), 215-233.

Polanyi, K. (1944). *The great transformation*. Farrar and Rinehart.

Qazi, J. y T. Selfa. (2005). The politics of building alternative agro-food networks in the belly of agro-industry. *Food, Culture and Society*, *8*(1), 46-72.

Radin, M. J. (1996). *Contested commodities*. Harvard University Press.

Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter y E. Wangari (eds.). (1996). *Feminist political ecology*. Routledge.

Robbins, P. y J. T. Sharp. (2003). Producing and consuming chemicals: the moral economy of the American lawn. *Economic Geography*, *79*(4), 425-451.

Rutherford, J. (1990). A place called home: identity and the cultural politics of difference. En J. Rutherford (coord.), *Identity: community, culture, difference* (9-27). Lawrence and Wishart.

Sachs, C. (1996). *Gendered fields: rural women, agriculture, and environment*. Westview Press.

Sage, C. (2003). Social embeddedness and relations of regard: alternative "good food" networks in South-West Ireland. *Journal of Rural Studies*, *19*, 47-60.

Sevenhuijsen, S. (2000). Caring in the third way: the relation between obligation, responsibility and care in third way discourse. *Critical Social Policy*, *62*, 5-37.

Smith, S. J. (2005). States, markets and an ethic of care. *Political Geography*, *24*, 1-20.

Stanford, L. (2006). The role of ideology in New Mexico's csa (community supported agriculture) organizations: conflicting visions between growers and members. En R. Wil (coord.), *Fast food/slow food* (181-200). Altamira Press.

Sturgeon, N. (1997). *Ecofeminist natures: race, gender, feminist theory and political action*. Routledge.

Trauger, A. (2004). Because they can do the work: women farmers in sustainable agriculture in Pennsylvania, USA. *Gender, Place and Culture*, *11*(2), 289-307.

Trauger, A., C. Sachs, M. Barbercheck, K. Brasier y N. E. Kiernan. (2010). Our market is our community: women farmers and civic agriculture in Pennsylvania, USA. *Agriculture and Human Values*, *27*. 43-55.

Tronto, J .C. (1993). *Moral boundaries*. Routledge.

Vitek, W. y W. Jackson. (1996). Rooted in the land. Yale University Press.

Walz, E. (2004). *Final results of the Fourth National Organic Farmers' Survey: Sustaining organic farms in a changing organic market place*. Organic Farming Research Association. http://www.ofrf.org

Washington Tilth Producers Directory. 2005. Tilth Producers.

Washington Tilth Producers Directory. 2007. Tilth Producers.

Wells, B. L. y S. Gradwell. (2001). Gender and resource management: community supported agriculture as caring-practice. *Agriculture and Human Values*, *18*, 107-119.

Whatmore, S. (1991). *Farming women: gender, work, and family enterprise*. Macmillan.

29. Las mujeres y la política del lugar*[1]

Wendy Harcourt y Arturo Escobar

Resumen: Wendy Harcourt y Arturo Escobar presentan los conceptos clave tratados en este número de la revista. Aportan un análisis de la organización política de las mujeres en el contexto de la globalización con un diálogo con el trabajo conceptual de intelectuales activistas inmersos en debates sobre la naturaleza de la globalización.

Palabras clave: cuerpo; cultura; incrustación; ambiente; globalización; glocalidades; hogar; justicia; entramados; espacio público.

La organización de las mujeres basada en el lugar

Cuando observamos el creciente número de organizaciones políticas de mujeres en todo el mundo, es evidente que las mujeres están participando en una política nueva y vital en torno a sus cuerpos, su hogar, su ambiente y el espacio público social. Trabajan en red a escala local y transnacional, tratando de defender sus lugares y transformando al mismo tiempo las relaciones sociales desiguales en su seno.

---

1 Publicado originalmente en: Wendy Harcourt y Arturo Escobar, 2002, "Women and the politics of place", *Development*, 45: 7-14.
*N de T.: Este texto es el capítulo introductorio de un volumen de la revista Development, por ello a lo largo del texto hay continuas menciones al contenido de los artículos que lo conforman; así como a discusiones que forman parte del contexto editorial de la revista. En esta traducción se han mantenido dichas referencias cuando resultan pertinentes para la comprensión del argumento de los autores. No obstante, debe tenerse en cuenta que algunas de ellas remiten específicamente al contexto de la publicación original.

Este artículo, extraído de otro más extenso elaborado para el proyecto "Poder, cultura y justicia: las mujeres y la política del lugar",[2] Se centra en los conocimientos de los grupos de mujeres sobre su organización basada en el lugar y pone en diálogo sus conocimientos con el trabajo conceptual de intelectuales inmersos en debates sobre la naturaleza de la globalización. Exploramos cómo las mujeres hacen frente a los procesos mundiales y les dan forma —cómo se organizan en torno al "lugar" y utilizan las redes locales y globales para crear un mundo más justo y equitativo—. Nos preguntamos ¿de qué manera las luchas de las mujeres en torno a la defensa del lugar son la fuente de nuevas formas de creatividad, cultura, ideas, desarrollo alternativo y economías alternativas? ¿Cómo interactúan las vidas de las mujeres en el lugar con los flujos globales de información, medios de comunicación y mercancías? ¿Cómo configuran y cambian la cultura capitalista moderna global, en apariencia cada vez más homogeneizada, a medida que se interconectan?

El destino del lugar

Tanto en los debates dominantes como en los críticos, la globalización se presenta como un fenómeno económico y cultural que lo abarca todo, sin alternativa posible. Como tales, los lugares concretos parecen desaparecer ante el inevitable avance de lo global. La globalización se considera impulsada por procesos capitalistas globales y los principios neoliberales. Al mismo tiempo, la globalización se entiende como una mayor interconexión de las personas que conduce a la homogeneización cultural en todo el mundo. Cada vez más parece que una única cultura del consumo, impulsada y dominada por la cultura estadounidense, está monopolizando este movimiento, facilitado fundamentalmente por las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).

2 Este artículo es una versión muy abreviada del ensayo de antecedentes que se preparó para el proyecto "Power, culture, and justice: women and the politics of place", coordinado por la Society for International Development con el apoyo de la Fundación Rockefeller, preparada por los autores y Michal Osterweil. Véase la sección editorial de este número para más detalles sobre el proyecto.

Estas dos facetas de lo que podríamos llamar globalización capitalista neoliberal son lo que mucha gente supone que dominan todo lo que hacemos. Y que, por tanto, la mejor estrategia para las naciones, regiones o grupos sociales es solo intentar ganarse un mejor lugar en esa economía global y en la sociedad global —al producir más, consumir más y contribuir al crecimiento del libre mercado—. Sin embargo, aunque el mundo esté cada vez más interconectado, dista mucho de convertirse en una "tierra de consumo" sin lugar. La lucha en torno al lugar continúa tanto para los que buscan un lugar más equitativo dentro de la globalización como para los que preferirían vivir sin la globalización capitalista. Arif Dirlik y Julie Graham, en sus comentarios a continuación, ofrecen importantes ideas sobre cómo leer la globalización. Dirlik pide un análisis de la globalización más sofisticado y con más historicidad que reconozca las diversidades culturales basadas en el lugar. Y Julie Graham sugiere que entendamos y promulguemos nuevas formas de globalización y desarrollo. Juntos con Kathie Gibson (en su introducción al conjunto de artículos que tratan de las mujeres y el activismo económico en el lugar como trabajadoras migrantes en Filipinas, China rural y Papúa Nueva Guinea), Graham sostiene que existen alternativas y "antídotos" al capitalismo que pueden basarse en lo distintivo de las mujeres que participan en diversas economías no capitalistas que habitan lugares concretos.

Un sentido global de lugar

Como muestra este número de la revista, al observar el creciente número de organizaciones políticas de mujeres, sería engañoso imaginar que la globalización lo abarca todo y que los lugares concretos están desapareciendo o son intrascendentes para las vidas de las mujeres. En el mundo actual, los lugares ya no están aislados ni son puros, estáticos o solo tradicionales; los lugares están claramente hechos y afectados por sus encuentros con procesos globales. Pero incluso en un mundo globalizado el lugar sigue siendo la forma en que la gente conoce y experimenta la vida. Podemos encontrar un McDonald's en Nueva Delhi, pero esa experiencia sigue siendo propia de Nueva Delhi. En casi todos los debates de la globalización se asume que "lo global" es necesariamente donde reside el poder y que, por tanto, lo global determinará de forma inevitable la historia. Y "lo local" —lugares

concretos, modelos económicos alternativos, identidades regionales— se enfrenta a la patética elección de adaptarse o perecer. En última instancia, este tipo de pensamiento socava y desestima las importantes resistencias y realidades que se desarrollan en el plano local. Lourdes Arizpe lo subraya en los comentarios que siguen, en su debate sobre cómo las preocupaciones locales transforman las iniciativas globales en procesos *glocales* a medida que nos enfrentamos a la "igualdad de la vulnerabilidad".

Los grupos de mujeres en su vida cotidiana califican de procesos globales. La política del lugar plantea una forma alternativa de entender la globalización que reconoce las diversas manifestaciones de la propia globalización. Nuestro concepto de política de las mujeres basada en el lugar se refiere a las diversas actividades políticas que llevan a cabo las mujeres en torno al cuerpo, el ambiente, la comunidad y el espacio público donde los grupos de mujeres redefinen la acción política. Hacemos hincapié en las actividades políticas de las mujeres basadas en el lugar para tratar de escuchar las luchas silenciadas de las mujeres, a menudo consideradas como el "otro" en el ámbito político público, dominado por los hombres.

Los cuerpos de las mujeres son el primer lugar donde participan en la lucha política. Esta incluye la lucha por la autonomía, la integridad y los derechos sexuales y reproductivos, por una maternidad segura, por liberarse de la violencia y la opresión sexual. El cuerpo es el escenario de muchas luchas por diferentes identidades, formas de pensamiento y prácticas cotidianas. Porque a menudo se silencia o ignora a las mujeres y, sin descartar las múltiples formas de opresión que se ejercen por medio del cuerpo, vemos también que los cuerpos de las mujeres se pueden volver el único lugar donde expresar sus necesidades, sufrimientos y alegrías. Yvonne Underhill, en sus debates sobre el cuerpo como el lugar "más cercano-íntimo" en Papúa Nueva Guinea, "donde la política del lugar se lleva claramente en el cuerpo", describe el modo en que las mujeres wanigela maniobran las redes de conocimiento y poder en torno al cuerpo vivido en sus vidas cotidianas. Wendy Harcourt y Khawar Mumatz examinan la captación del cuerpo político en los debates internacionales sobre población y desarrollo en su relectura de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo) desde una perspectiva basada en el lugar. Randa Farah rompe con los estereotipos del cuerpo cubierto de las mujeres en Palestina, mostrando cómo se

apropian del lugar y de los discursos de formas que transforman el significado de la vestimenta y el velo, mientras sus prioridades son abordar las cuestiones políticas y económicas del desplazamiento.

Un segundo lugar es el del *hogar*, donde muchas mujeres siguen desempeñando sus papeles e identidades sociales y políticas más importantes. El hogar sirve paradójicamente como un espacio seguro en el que las mujeres tienen un poder considerable y, al mismo tiempo, como un lugar donde experimentan un alto grado de violencia y opresión. El hogar es un terreno crucial de lucha política. No solo es donde se negocian muchas relaciones de poder (en el seno de la familia), sino también donde se produce gran parte del trabajo vital pero infravalorado. La redefinición de sus relaciones en el hogar y entre el hogar y la comunidad es otro lugar importante para elaborar nuevas prácticas políticas. Laura Ma. Agustín ahonda en la retórica sobre el hogar en su debate sobre las trabajadoras sexuales inmigrantes, describiendo los nuevos entornos en los que viven muchas mujeres en la trayectoria global de abandono del hogar. Charito Basa comparte su propia experiencia laboral y la de otras filipinas en Europa, su sensación de alienación y desplazamiento de casa y las formas en que intentan recrear su hogar en un contexto estatal hostil. Saba Gul Khattak subraya el complejo significado de *watan* ('hogar') para las refugiadas afganas. Afirma que las afganas que soportan niveles aterradores de violencia, años de guerra y desplazamientos han perdido el hogar como forma de vida, manera de ser, cultura y forma de pensar ligado a su más profundo sentido de identidad. Necesitan tiempo y espacio para la sanación personal y colectiva, y para redescubrir su hogar, la creatividad y su sentido de sí mismas.

El tercer lugar lo ocupa el *ambiente*. En esta perspectiva, el ambiente no se limita a la naturaleza, sino que se entiende como un entramado de múltiples capas de relaciones económicas, políticas y sociales que definen el entorno de las mujeres. Como tal, está inextricablemente conectado a todos los aspectos de la sobrevivencia: a cuestiones de los medios de subsistencia, la justicia y la calidad de vida. Si bien el ambiente está claramente ligado a la supervivencia, los significados de ambiente y supervivencia varían de un lugar a otro, pero están vinculados y afectados de continuo por contextos más amplios, incluso globales. El ambiente está íntimamente ligado a las relaciones de género y es moldeado por ellas. Los derechos, las responsabilidades y las organizaciones

ambientalistas son procesos profundamente ligados al género. Las mujeres suelen verse afectadas de modo más directo por la destrucción del ambiente; esto también significa que en la actualidad las mujeres están a la vanguardia de las luchas ecológicas en muchas partes del mundo. Arturo Escobar, Dianne Rocheleau y Smitu Kothari muestran cómo las mujeres en los movimientos ecologistas de India, República Dominicana y Colombia están convirtiéndose en el centro de una política del lugar. Argumentan que, dado que vivimos en un lugar, tenemos que integrar el cuerpo, el hábitat, el hogar y la comunidad en nuestro análisis del ambiente. Libia Grueso y Leyla Andrea Arroyo ilustran esta integración en la tabla al final del artículo, que evidencia los problemas a los que se enfrentan las mujeres negras en su organización dentro de los movimientos que se movilizan para defender el territorio del Pacífico colombiano. En un escenario completamente distinto de Finlandia, Liisa Horelli también describe el enfoque holístico de las luchas de las mujeres basadas en el lugar en torno al hábitat, el ambiente y el hogar.

El último lugar es *el espacio público social*, el ámbito principalmente dominado por los hombres en el que se toman las decisiones políticas y al que la mayoría de las mujeres siguen teniendo un acceso limitado. Y es en este ámbito donde sus preocupaciones de género son silenciadas o están ausentes. Los movimientos de mujeres llevan muchos años creando diversas vías de entrada a ese espacio, aunque sigan siendo marginadas al pulso de formas dominantes del poder político. Al redefinir lo que cuenta como político y en el corazón de la política del lugar, hay un desafío implícito y una renegociación de lo que se debate y valora en público. La creación de redes y alianzas es el núcleo del movimiento de las mujeres en el espacio público social —ya sea como parte del movimiento mundial de mujeres sobre una multiplicidad de temas, como se describe en el artículo de Wendy Harcourt, Lila Rabinovich y Fatma Alloo, o como luchadoras y guerrilleras como retrata Ilja Luciak, que habla de Centroamérica y Neloufer de Mel cuando describe las vidas fracturadas de mujeres en las zonas de guerra de Pakistán y Sri Lanka—. Otros artículos hablan de la organización de las mujeres basada en el lugar para cambiar las barreras jurídicas, educativas e institucionales que impiden el empoderamiento de las mujeres. El estudio de Roxann Prazniak destaca el activismo pionero de las negras de Virginia para preservar su historia y su lugar en unas luchas que

pueden parecer regenerar las estructuras de la injusticia. El estudio de Cassandra Balchin sobre la solidaridad y la información de la Red de Mujeres que Viven Bajo la Ley Musulmana argumenta que la globalización ha contribuido al auge de las políticas identitarias y el feminismo transnacional, observación de la que se hace eco el informe de Kalayani Menon-Sen sobre las diversas resistencias de las mujeres asiáticas a la globalización.

Nuestra perspectiva cimentada en el lugar sugiere que el cambio político transformador se produce mejor cuando las mujeres son capaces de actuar en los cuatro ámbitos del lugar.

Políticas del cuerpo

En un mundo en el que los discursos y prácticas dominantes maltratan y marginan de continuo a las mujeres por medio de sus cuerpos física y socialmente construidos, tiene sentido que los nuevos conocimientos, críticas y visiones estén vinculados de forma estrecha a las diversas experiencias de las mujeres en esos cuerpos. Aunque los hombres también tienen experiencias corporales, la historia y la cultura han hecho que su relación con sus propios cuerpos se construya de manera muy diferente. Por tanto, no se trata de privilegiar a las mujeres porque sean esencial o fundamentalmente diferentes a los hombres, sino un reconocimiento de que las categorías esenciales persisten y que deben ser abordadas como tales.

La intersección de la teoría feminista y la teoría de desarrollo ofrece un importante punto de vista para la elaboración de un nuevo lenguaje crítico que aborde de manera más adecuada la politización de los cuerpos femeninos —y otros cuerpos—. Necesitamos entender el cuerpo no como algo ligado a lo privado o al yo —la idea occidental del individuo autónomo—, sino como ligado integralmente a expresiones materiales de la comunidad y el espacio público. En este sentido, no hay una división clara entre lo corpóreo y lo social, sino lo que se ha dado en llamar "carne social" (Beasly y Bacchi, 2000). El propio cuerpo es un lugar político que media en las experiencias vividas en las relaciones sociales y culturales.

Al llamar la atención sobre los cuerpos como sujetos políticos, se reconoce que "somos nuestros cuerpos" y que toda experiencia racional, emocional o de otro tipo, o filtro de la experiencia, se produce en última instancia en el cuerpo. El yo político no es distinto del cuerpo; solo mediante determinados procesos ideológicos e históricos las experiencias y actividades corporales han sido removidas del discurso político.

El hogar

Desde hace tiempo se reconoce que el hogar es un lugar ambivalente con respecto a la justicia y la igualdad para las mujeres. Por un lado, es donde las mujeres parecen ejercer más el poder, donde se reconocen sus papeles de abuela, madre, esposa, y donde pueden tomar decisiones y ser respetadas. Por otro lado, es donde las mujeres están más expuestas y son más vulnerables al abuso sexual, la violencia y la explotación. A menudo son las condiciones intolerables en el hogar las que obligan a las mujeres a buscar alternativas para sus vidas, a defender sus cuerpos y sus hijos creando otros hogares y lugares a salvo de la violencia que sufren en el hogar. La ideología del hogar seguro se está desmoronando. Las mujeres no solo luchan para acabar con las prácticas que contribuyen a la desigualdad, sino que luchan por redistribuir y crear un nuevo valor económico y social para las prácticas asociadas al hogar y la domesticidad.

El ambiente

Los debates sobre la mujer, el ambiente y el desarrollo sostenible de la última década son un ejemplo fascinante de cómo las mujeres están forjando espacios políticos que desafían a las instituciones hegemónicas del Estado y el mercado. Como integrantes del llamado "tercer actor" en la *polis* moderna —la sociedad civil—, las mujeres han criticado el modelo tradicional de desarrollo económico por ignorar las necesidades del ambiente y de las personas. Las mujeres han entrado de lleno en estos debates, y en grandes cantidades, porque está en juego su sustento y el de sus familias.

Las voces de las mujeres sobre ambiente y desarrollo sostenible surgieron con mayor fuerza en el ámbito internacional en el periodo que comenzó en 1992, cuando se celebró la Cumbre de la Tierra UNCED[3] en Río de Janeiro. Estas voces defendían que las mujeres, sobre todo las mujeres pobres del Sur, son las más interesadas en proteger la base de recursos naturales (así como la salud básica y el saneamiento básico de su ambiente), y que son las fuerzas externas del Estado y del mercado mundial las que están rompiendo la relación entre las personas y su ambiente. El ambiente de las personas incluye los significados, valores y formas generales de ser que las caracterizan y distinguen entre las diferentes comunidades. Muchas mujeres (y cada vez más hombres) sostienen que debemos buscar un enfoque económico, ecológico y ético integrado que tenga en cuenta las perspectivas particulares y locales de las mujeres, además de tener en cuenta niveles de responsabilidad tanto locales como internacionales. Han propuesto un enfoque holístico que valore formas no occidentales de pensar y organizarse y que permita imaginar formas de ser alternativas. El sistema económico dominante podría no considerarlas buenas o dignas porque consideran que la ganancia y la productividad son secundarias a la paz y la sostenibilidad ecológica. Las mujeres de centros urbanos, selvas tropicales y ciudades mineras han formado alianzas y asociaciones basadas en la creencia de que la realidad cotidiana de las mujeres al sostener sus medios de vida han de ser la base de una remodelación de la agenda internacional sobre desarrollo sostenible.

Espacio público

Las dimensiones políticas del cuerpo, el hogar y el ambiente como lugar convergen en la negociación de los movimientos de mujeres para entrar en la esfera pública. Las luchas políticas de las mujeres son por un mayor acceso al ámbito dominado por los hombres, tanto como intentan cambiar el terreno mismo en el que consideramos que se producen la política y el cambio político. En cierto sentido, la "política del cuerpo" —la política en torno al cuerpo, el hogar y el ambiente—, más allá de perseguir cambios concretos, también trabaja para la validación de asuntos y perspectivas que antes se consideraban apolíticas o privadas, fuera del ámbito público

3 United Nations Conference on Environment and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo).

social. La política de lugar en la esfera pública no solo consiste en los esfuerzos, por medios gubernamentales y no gubernamentales, para participar o influir en la política institucional, sino también para arrojar luz sobre la naturaleza política de la cultura. La cultura es política precisamente porque el significado y el poder de producir o determinar significados es constitutivo de nuestras experiencias vividas, así como de nuestros análisis de estas.

Al validar las experiencias vividas por las mujeres como políticas por medio de estas políticas de lugar emergentes, las mujeres en efecto están luchando por cambiar la cultura dominante, que supone una visión unilateral y vertical de la política y el cambio social. El trabajo político de las mujeres, por tanto, tiene mucho que ver con los códigos culturales cambiantes y con crear un lenguaje o punto de vista crítico que pueda abrir el dominio público a más participantes en el proceso de toma de decisiones, así como señalar la ubicuidad de esos lugares públicos dentro de las prácticas culturales aceptadas (véase Julie Graham a continuación y su propuesta de políticas del lugar feministas).

Reintegrando la cultura y la justicia

Una de las características más notables de los cuatro ámbitos del lugar que acabamos de presentar —el cuerpo, el hogar, el ambiente y el espacio público social— es que, aunque a menudo se les considera lugares privados de lucha y sin importancia, cuando se politizan, cuestionan muchas de las suposiciones más fundamentales de los discursos dominantes y globales. Las políticas basadas en estos cuatro ámbitos cuestionan la presunción de que el conocimiento solo es "importante" si es imparcial, objetivo y racional, y en cambio señalan la importancia de los puntos de vista materiales, subjetivos y personales. La política de las mujeres basada en el lugar está integrada en la vida material que intentan cambiar, no fuera de ella.

La noción de política del lugar está estrechamente vinculada a nuestro reconocimiento de que la política se compone en gran medida de disputas por el significado: la interacción entre cultura y poder. Así como las mujeres han redefinido la naturaleza política de sus cuerpos, la política

basada en el lugar sugiere que debemos tener en cuenta muchos más aspectos de nuestros contextos sociales y culturales a la hora de construir un movimiento en aras del cambio social. La noción de experiencia integradora sugiere la importancia de situar a una persona en su contexto social y cultural sin atarlo de modo artificial a una identidad cultural o social fija. Estar integrado en un lugar concreto no significa en absoluto que el lugar en sí esté cerrado al cambio, sino que el lugar permite una comprensión más realista y potencialmente progresiva de la identidad como algo dinámico y cambiante.

Reintegrar la política en su lugar, por tanto, significa también situar los debates y los activismos rotunda y profundamente en toda su complejidad contextual. Esto nos ofrece un punto de vista desde el que podemos desarrollar soluciones potencialmente transformadoras. Nos proporciona un punto de partida desde el que reconocer (en lugar de ocultar o ignorar) y abordar así las cruciales y difíciles preguntas a lo que se enfrentan los movimientos políticos en un contexto global. Si se cuestiona una práctica dentro de sus propios parámetros culturales, donde los actores pueden notar los diversos intereses políticos y económicos de los que argumentan en ambos bandos, se puede resolver un problema sin poner en peligro la especificidad y autonomía de las culturas (véanse los artículos de Cassandra Balchin y Randa Farah).

Del mismo modo, debemos reconocer no solo nuestros antecedentes culturales y lugares, sino también nuestras posiciones y papeles particulares como mediadores, activistas y académicos. Si nos tomamos en serio la importancia de trabajar desde posiciones concretas, debemos buscar de forma consciente y constante los parámetros, límites, identidades y privilegios que nos forman o moldean. Esto no quiere decir que moverse entre culturas, escribir sobre sociedades o emitir juicios sobre la eficacia de determinadas prácticas no sea un proceso complejo, sino que sugiere que reconocer deliberadamente e interrogar estos límites cambiantes es una de las estrategias más importantes que ofrece una política del lugar.

Las complejidades en las intersecciones de lugar, poder y cultura

A la vez que defendemos la validez de la política basada en el lugar, también debemos tener en cuenta las innumerables paradojas, desafíos y ambivalencias que surgen dentro y fuera del lugar. Siempre debemos considerar que los propios lugares son lugares de relaciones de poder desiguales, incluso opresivas y que, para muchos, incluso identificar el "propio lugar" es una tarea política y personalmente compleja, llena de dolorosas ambivalencias, pero también de posibilidades potencialmente progresistas.

Por ejemplo, ¿cómo promovemos la viabilidad y autonomía de las culturas tradicionales y, al mismo tiempo, dejamos espacio para el cambio? ¿Cómo puede un grupo de mujeres llevar a cabo una política transformadora que incluya la autonomía cultural de su comunidad tradicional, reservándose al mismo tiempo el derecho a modificarla? ¿Cómo puede crear o moverse en un lugar nuevo, no reconocido e indefinido en la actualidad?

Del mismo modo, en nuestro argumento a favor de la defensa del lugar, no podemos ignorar el hecho de que no existe un lugar "puro" o fácilmente definible. Debemos abordar las paradojas, los retos y las necesidades conceptuales y prácticas que surgen debido al número sin precedentes de personas que se ven obligadas a (o que deciden) abandonar su hogar y su lugar —los migrantes, trabajadores sexuales, desplazados, refugiados, incluso las víctimas de desastres naturales, etc.—, y nos obligan a tener en cuenta las tensiones entre el movimiento y el apego, el desplazamiento y la reconstrucción, la identidad y la pertenencia que viven muchas personas.

Una política basada en el lugar debe enfrentarse de continuo a la complejidad de las posibilidades del lugar en una época en la que nada es puramente local ni global.

Una caja de herramientas conceptuales

Al reflexionar sobre la experiencia de la política de las mujeres basada en el lugar, nos ha parecido útil un conjunto de conceptos relevantes que pueden servir como una "caja de herramientas" básica y como el inicio

de un lenguaje crítico que nosotras —activistas, mediadoras y académicas—podemos utilizar para examinar, comprender y elaborar estrategias en torno a casos concretos.

Redes/entramados

El concepto de red es fundamental en los procesos de globalización. La mayoría de las redes de resistencia operan de forma parcial mediante las redes dominantes, o al menos interactúan con ellas. Las redes de oposición son las que conectan grupos y movimientos sociales entre sí. Podrían denominarse entramados, con la diferencia de que, en contraste con las redes dominantes, los entramados tienden a ser no jerárquicos y autorganizados. Se crean del entrelazamiento de elementos heterogéneos y diversos unidos por la complementariedad o experiencias comunes. Crecen en direcciones imprevistas. Los movimientos sociales antiglobalización, en su heterogeneidad y carácter autorganizativo, podrían considerarse incipientes de este tipo.

Los entramados implican dos dinámicas paralelas: estrategias de localización y de entrelazamiento. Las estrategias de localización contribuyen a la consistencia interna de cada punto concreto de la red, además de que lo diferencian del resto. El entrelazamiento, por su parte, entrelaza los sitios, aprovechando y acentuando sus similitudes. Los entramados resultantes del movimiento antiglobalización, por ejemplo, podrían estar en condiciones de exigir a las grandes instituciones financieras y de desarrollo una mayor responsabilidad por las jerarquías que siguen apoyando. Los entramados no necesariamente son "moralmente superiores" a las redes o jerarquías dominantes, pero tienden a oponerse.

Glocalidades

Muchas de estas redes y entramados enlazan múltiples lugares que en el proceso se vuelven o crean espacios que no son locales ni globales, sino "glocales". Aunque en principio algunos autores definieron la *glocalización* como un proceso por medio del cual el capital transnacional se apodera de localidades,

concebimos las glocalidades no como intrínsecamente buenas ni malas, sino potencialmente estratégicas. En cierto sentido, las glocalidades deben entenderse como descriptivas de todos los lugares, porque hoy en día ningún lugar está constituido por completo por factores locales o globales. Al mismo tiempo, los espacios glocales, entendidos como estratégicos, tienen un enorme potencial como base de nuevas políticas e identidades transformadoras. Las glocalidades, los lugares y espacios producidos por la vinculación de diversos movimientos sociales en redes y entramados de oposición, o por la conexión de lugares a procesos globales, son a la vez estratégicos y descriptivos, potencialmente opresivos y transformadores.

Esto también equivale a decir que la globalización no se produce realmente "desde arriba" o "desde abajo", sino siempre "entre medias". Las glocalidades son a un tiempo globales y basadas en el lugar, y su configuración específica también dependerá de su contenido cultural, así como de las dinámicas de poder en juego. Para dar un ejemplo, una plantación es una glocalidad producida por las formas más convencionales de capital y de concebir la alimentación y la naturaleza. Una selva tropical diversa, por el contrario, es un tipo de glocalidad diferente por completo, producida por las prácticas culturales, económicas y ecológicas de las comunidades locales (como ejemplifica el caso del Pacífico colombiano) que difieren de forma considerable de las que produce una plantación, aunque esté relacionada con ellas.

Definiendo una política del lugar

El empoderamiento femenino, la violencia contra la mujer, el ambiente y la salud son importantes temas políticos en la actualidad. En lugar de quedar subsumidas por "lógicas globales", la organización política de las mujeres y otros movimientos sociales de todo el mundo participan en políticas que en realidad están muy arraigadas en sus lugares sociales, económicos y culturales específicos, y no ceden fácilmente a las tendencias de la globalización capitalista. En lugar de limitarse a aceptar el sistema capitalista o los sistemas sociales y culturales homogeneizados como verdades naturales e inevitables que escapan a su control o elección, los grupos políticos de

mujeres y otros movimientos sociales están trabajando para formar lo que hemos identificado como "una política del lugar".

Mujeres de todo el mundo utilizan sus conocimientos y experiencias para crear lugares nuevos y distintivos, lugares que no son ni totalmente modernos, ni tradicionales en su totalidad; ni impolutos ni puros. Valiéndose de redes globales como la internet y las organizaciones no gubernamentales transnacionales, estos movimientos sociales trabajan para afirmar sus propias visiones, luchar por justicia, y dar forma a los procesos mundiales.

Al repensar las respuestas políticas a la modernidad y el capitalismo global, es importante aprovechar la creatividad, los conocimientos y la experiencia de los grupos de mujeres que participan en la política basada en el lugar. Los conflictos que experimentan las mujeres en los diferentes ámbitos (cuerpo, hogar, ambiente y espacio público social) inauguran nuevas formas de relaciones culturales y políticas. Como protagonistas de sus propias vidas, las mujeres dirigen actividades basadas en el lugar, formando entramados y definiendo glocalidades. Trabajan juntas por una mayor equidad, respetando y trabajando con las diferencias culturales y de otro tipo. Las estrategias para una mayor equidad y transformación feminista que respete las diferencias culturales pueden elaborarse a partir de estas conexiones globales. Tales estrategias podrían repudiar el desarrollo dominante en nombre de la defensa del lugar, y crear nuevas estructuras de poder y nuevas formas de cultura.

Referencias

Beasely, C. y C. Bacchi. (2000). Citizen bodies: embodying citizens – A feminist analysis. *International Feminist Journal of Politics*, *2*(3), 337-358.

SECCIÓN F. TEMAS
F1. LA VIDA SOCIAL DE LAS COSAS Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS

30. La metrópolis: la infraestructura del antropoceno[1]

Gastón Gordillo

En mayo de 2003 conduje por primera vez al pie de los Andes argentinos, en la provincia de Salta, una región donde las montañas se encuentran con las tierras bajas del Gran Chaco. Cuando me dirigía al norte, hacia la ciudad de Las Lajitas, en medio de un paisaje dominado por campos de cultivo, las carreteras estaban en pésimo estado. El pavimento estaba plagado de baches y grietas, lo que me obligaba a conducir con cuidado, zigzagueando para evitar topes y colisiones. A la sensación de una infraestructura decadente se sumaban unas vías férreas decrépitas, paralelas a la carretera, producto de planes de privatización que habían acabado con los trenes de pasajeros una década antes. Las carreteras por las que conducía eran la infraestructura principal, aunque precaria, para la movilidad desde y hacia Las Lajitas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención de las carreteras no fue su estado de deterioro, sino el intenso tráfico de camiones que circulaban por ellas. Los camiones avanzaban lentamente, manejando con mucho cuidado sobre el asfalto dañado, pero su movimiento era persistente y formaban parte de una larga caravana de vehículos que, según supe, confluyen en un conjunto de grandes silos que se habían instalado al sur de Las Lajitas en la década de los noventa (Figura 1).

1 Publicado originalmente en: Gastón Gordillo, 2018, "The metropolis: the infrastructure of the Anthropocene", en K. Hetherington (ed.), *Infrastructure, environment and life in the Anthropocene* (pp. 66-94): Duke University Press.

Figura 1. Silos en Piquete Cabado, al sur de Las Lajitas. En el suelo se pueden ver bolsas herméticamente selladas para el almacenamiento de granos (*silobolsas*). Foto del autor.



Los silos vertían chorros de soya en los camiones, que luego daban vuelta y se dirigían hacia el sureste por más de 1 300 kilómetros hasta las orillas del río Paraná, cerca de la ciudad de Rosario, la tercera más grande del país y pronto llamada la "capital de la soya" de Argentina. Ahí, las fábricas de molienda transformaban la soya en aceite y harina de soya, que cargaban en barcos que se dirigían hacia el mar río abajo por el Paraná y a los puertos alrededor del mundo, sobre todo en Asia y Europa.

En retrospectiva, en el movimiento en apariencia irrelevante de esos camiones que circulaban por las carreteras deterioradas presenciaba, en primer lugar, la materialización de la cosecha récord de soya de 2003 y el inicio del "*boom* de la soya" en Argentina, que en pocos años se convirtió en el tercer productor de

soya más importante del mundo después de Estados Unidos y Brasil. Y lo que es aún más importante, Argentina se convirtió en el primer exportador mundial de harina y aceite de soya, lo que fue posible gracias a la existencia de un enorme conglomerado de fábricas de molienda en torno a Rosario. Sin embargo, en aquellos primeros días del *boom*, me sorprendieron el flujo de camiones y los grandes silos alrededor de Las Lajitas. No sabía que la agroindustria era tan activa en esa zona de Salta, una provincia del norte aparentemente lejana del núcleo agrícola en el centro de Argentina. En la década de los setenta, Las Lajitas era un pueblo tranquilo rodeado de bosques con escasa infraestructura, salvo el ferrocarril. La región era habitada por campesinos y trabajadores rurales: gauchos o vaqueros de origen mestizo que criaban ganado "en el monte". En 2003, buena parte de esa geografía física y social había desaparecido con toda claridad. Mientras los bosques permanecían en las estribaciones y en el interior del Chaco, alrededor de Las Lajitas habían sido sustituidos por fincas mecanizadas que operaban por medio de campos, carreteras y silos para responder al auge mundial de las materias primas ocasionado por la rápida urbanización de China. Frente a la creciente demanda de tierras para plantar soya, aumentaba la deforestación al norte y al este de Las Lajitas. En mis primeras semanas en la región, me impactó no solo el tráfico de camiones por la carretera, sino también la otra cara de esta actividad: las topadoras aplastando los bosques e innumerables formas de vida para crear aún más campos de soya (véase Gordillo, 2014).[2]

En los trece años siguientes (2003-2016), volví a Las Lajitas varias veces y fui testigo de cómo la acción combinada de la deforestación, el desalojo de los residentes campesinos y la expansión de la infraestructura dieron lugar a un terreno más urbanizado.[3] La primera infraestructura que se modernizó fueron las carreteras, el principal medio para movilizar la extracción de soya desde Salta hacia Rosario, la puerta de entrada al mar. En mi segunda visita, en 2004, empecé a encontrar cuadrillas y maquinaria pesada sustituyendo el asfalto dañado. En 2007, las carreteras regionales se habían convertido en lisos y veloces canales de conectividad. Todas las gasolineras habían sido

2 Solo en 2003-2007, se destruyeron más de un millón de hectáreas de bosque en la provincia de Salta (Leake, López y Leake 2016).

3 Realicé por primera vez el trabajo de campo que dio lugar a mi libro *Rubble* en 2003-2007 (Gordillo 2014). Posteriormente volví en 2010, 2011, 2013 y 2016.

renovadas y ahora ofrecían internet inalámbrico a un volumen creciente de vehículos. A la entrada de las Lajitas, edificios modernos albergan a las empresas que venden insumos a los agricultores, desde herbicidas Monsanto hasta tractores John Deere. A pocos metros, el lujoso hotel Las Lajitas atrae sobre todo a hombres blancos directivos, ingenieros o agentes de Cargill, quienes se reúnen a discutir cómo plantar, cosechar, almacenar, vender y transportar soja y otros cultivos a Rosario. La mayoría son argentinos de otras partes del país, principalmente "del sur" (Córdoba, Rosario o Buenos Aires). Estos hombres suelen estar atentos a sus teléfonos, tabletas o computadoras, a los pulsos que llegan del otro lado del mundo y que pueden afectar sus estrategias y márgenes de ganancia. Algunos de ellos dirigen fincas cuyos campos parecen "rurales". Pero las fincas están mecanizadas, se rocían con herbicidas y forman parte de la red de infraestructura que se expandió con la deforestación.

Mientras presenciaba la expansión de la infraestructura urbanizada implantada por las elites empresariales recién llegadas a esta zona de Argentina, era evidente que la dramática transformación de Las Lajitas no implicaba el crecimiento de un objeto delimitado, autorreferido. Por el contrario, esos ensamblajes de carreteras, maquinaria, vehículos y silos estaban todos diseñados para facilitar el transporte de soya y sus derivados industrializados a centros urbanos densamente poblados alrededor del mundo. Al investigar cómo las cadenas de suministro de soya procesan y trasladan sus productos desde el norte de Argentina hasta una red planetaria de centros urbanos, aprendí poco a poco a observar la infraestructura alrededor de Las Lajitas como un *punto de entrada*, una *vía* hacia algo mucho más grande, de escala planetaria, y por tanto muy difícil de aprehender: lo que Timothy Morton (2013) llamaría un "hiperobjeto", pero que yo prefiero conceptualizar como un vasto ensamblaje: una constelación muy diversa, diferenciada pero interconectada, de nodos y conductos que mueven repetidamente objetos, cuerpos, energía e información a través de fronteras nacionales y continentes. En este capítulo, me baso en el caso de las cadenas de suministro de soya para analizar esta multiplicidad en movimiento como "la metrópolis".

Los pensadores más importantes de la metrópolis han sido teóricos radicales y activistas, principalmente Antonio Negri (2018), Alberto Toscano (2004, 2011,

2014), y el colectivo El Comité Invisible (Invisible Committee, 2009; 2015). Negri conceptualiza la metrópolis como "la estructura general que asume el capitalismo en su fase imperial", pero también como la espacialidad urbana que ha sustituido a la fábrica como el principal sitio de lucha y emancipación (Toscano 2004: 210). A su vez, influidos por Negri, los escritos de Toscano y del Comité Invisible, diseccionan la infraestructura de la metrópolis para revelar el poder de la logística en el capitalismo global. En las palabras de Toscano, "la metrópolis tiene como condición previa la intensificación y expansión de las líneas de suministro, y la logística se convierte en su principal preocupación, su producto central, y el determinante básico de su poder" (2011: 6).

A continuación, parto de estas ideas para conceptualizar la metrópolis en mayor profundidad y siguiendo líneas más materialistas y etnográficas, en especial mediante el análisis de cómo las cadenas de suministro de la soya conectan a Argentina con constelaciones urbanas de todo el mundo. En específico, parto de Henri Lefebvre (2003; 2004) y la literatura sobre infraestructura, logística y urbanización planetaria para descomponer la metrópolis en sus multiplicidades constitutivas y diferenciaciones fractales. La metrópolis, en este sentido, *no* es una figura del uno: un objeto totalizador, una versión extendida de "la ciudad" o un todo homogéneo: es, más bien, un movimiento guiado por los patrones capitalistas-imperiales de acumulación y la infraestructura que lo posibilitan; es una multiplicidad rizomática de encuentros y fricciones; una abstracción heurística y *concreta* para nombrar la materialidad del continuo que mueve la materia de un continente a otro para reproducir y expandir el metabolismo de las aglomeraciones urbanas más grandes de la tierra. La infraestructura de las metrópolis es, por tanto, "el arma secreta de las personas más poderosas del mundo" (Easterling, 2014: 15). Y la logística se convierte en el "arte de la guerra del capitalismo" (Bernes, 2013: 203).

Conceptualizar la metrópolis de esta manera es una tarea ambiciosa y compleja, sobre todo porque evoca la controvertida idea de la totalidad. Con el auge de las sensibilidades posestructuralistas, poshumanas y del actor-red, la idea de totalidad simboliza ahora para muchos, en palabras de Alberto Toscano y Jeff Kinkle, "totalitarismo en el peor de los casos, o crítica paranoica en el mejor", un concepto "corrompido por el deseo metafísico de coherencia y la soberbia del

dominio intelectual" (2015: 24). Sin embargo, la comprensión de la abrumadora escala de un mundo urbanizado e interconectado en la era del cambio climático no puede elaborarse sin un entendimiento crítico de la totalidad en el sentido más inmanente del término. Como insistía Theodor Adorno: "La totalidad no es una categoría afirmativa sino crítica", que busca identificar "la totalidad de las relaciones sociales", no para cosificarlas sino para *negarlas* (en Vouros, 2014: 179). Y la principal fuente de una comprensión no totalizadora de la totalidad urbana es Lefebvre, quien escribió que "el fenómeno urbano solo puede ser comprendido como una totalidad, pero su totalidad no puede ser aprehendida. Se nos escapa. Está siempre en otra parte" (2003: 186). La metrópolis, del mismo modo, es una totalidad inasible, una totalidad irrepresentable que escapa a nuestra capacidad de otorgarle sentido. Lo que la hace parcialmente opaca al pensamiento es tanto su escala planetaria como el hecho de que es redefinida de forma permanente por prácticas tejidas local y regionalmente.

Existen, por tanto, un sinnúmero de dimensiones de la vida humana y no humana, tanto en espacios urbanos como no urbanos, que escapan del alcance y el control de la metrópolis. Cada nodo de las redes planetarias urbanizadas es también un lugar con una historia, una textura y carácter político distintivo, irreductible a esta transnacionalidad, incluso en centros urbanos altamente globalizados como Londres, Dubái o Shanghái. Esto es aún más acentuado en regiones con fuertes tradiciones no urbanas. La mayoría de los residentes de Las Lajitas siguen celebrando a los gauchos como íconos de la región y perciben a las elites de la agroindustria como recién llegados arrogantes y con escaso amor por la tierra. En este y en otros pueblos, grandes multitudes acuden en peregrinación a santuarios en el bosque y en sitios en ruinas para venerar a vírgenes de piel oscura que consideran milagrosas (Gordillo, 2014). Las experiencias regionales, en este sentido, están conformadas por recuerdos, relaciones y disposiciones que superan con creces los ritmos de la agroindustria de exportación. No obstante, su impacto en esta región me obligó a interrogarme sobre las formas en las que este lugar *también* es parte de una intrincada conformación física planetaria. Esta conectividad tiene implicaciones globales a una escala aún mayor. La agricultura industrial es una de las fuentes principales del calentamiento global y del deterioro ambiental

en el mundo, debido a la destrucción de los bosques tropicales, su dependencia de pesticidas tóxicos y su subordinación a las demandas de la ganadería, ya que la mayor parte de la soya sudamericana no se cultiva para el consumo humano directo, sino para producir forrajes. Debido a esto, la cuestión de la metrópolis es también la del Antropoceno, que yo considero más que como una genérica "era de los humanos", como la era del cambio climático y de graves alteraciones ambientales producidas por el capitalismo (Moore, 2015).

En la primera sección, argumento por qué un giro conceptual que se aleje de la "globalización" y se acerque a la metrópolis puede ayudarnos a apreciar mejor tanto el *continuum* global como las diferencias que estructuran las cadenas de suministro. A continuación, analizo la metrópolis no desde sus nodos de aglomeración norteños más densamente poblados, sino desde sus *márgenes* en el "Sur global": en nuestro caso, en zonas donde la infraestructura urbana encuentra y destruye bosques habitados por campesinos que los defienden de forma activa ante el avance de las topadoras. En las últimas secciones, muestro cómo la violencia de las cadenas de suministro revela las jerarquías imperiales que estructuran la metrópolis, la prominencia de las diferencias nacionales en ella, así como las luchas y las fuerzas no humanas que interrumpen sus ritmos. Estas interrupciones ponen de manifiesto que la metrópolis es también un espacio generador de encuentros colectivos que ofrece la posibilidad de reinventar la comunalidad.

De la globalización a la metrópolis

En la década de los noventa, los estudiosos intentaron dar sentido al nuevo orden mundial producto del colapso del comunismo, la expansión planetaria de un capitalismo triunfante y el auge de las nuevas tecnologías de comunicación en el proceso de "globalización". Como señala Stuart Rockefeller (2011), estos primeros trabajos abordaron el problema de la globalización en gran parte desde una noción intangible de "flujos", característica de la influyente obra de Arjun Appadurai (1996) sobre los "etnoespacios" y de Manuel Castells (2011) sobre "la era de la informa-

ción". La obra de Saksia Sassen (2001) acerca de las "ciudades globales" fue importante para pensar la globalización en términos más espaciales: como un proceso que redefinió la naturaleza de la urbanización creando nodos urbanos poderosos y estrechamente interconectados que estructuran las transacciones financieras en el ámbito mundial, como Nueva York, Londres y Tokio. Sin embargo, como sostiene Ananya Roy (2009), el énfasis en las "ciudades globales" dio paso a una mirada euroamericana que ignoró las redes de urbanización del "Sur global", que ya no pueden descartarse por irrelevantes para la globalización (véanse Roy y Ong, 2011; Simone, 2004). Neil Brenner añade que las "ciudades globales" son insuficientes para comprender la urbanización planetaria, que moviliza también "vastas redes de acumulación y regulación espacial en cascada a lo largo de corredores intercontinentales de transporte", así como "grandes redes de infraestructura, telecomunicaciones y energía" (2013: 88).

En este sentido, los trabajos de investigación más recientes sobre la infraestructura y la logística han sido importantes para redefinir estas cuestiones en términos más materialistas, en especial mediante el análisis de los ensamblajes, objetos y movimientos que posibilitan el capitalismo global (Barry, 2013; Cowen, 2014; Easterling, 2014; Larkin, 2013). La literatura sobre el "metabolismo urbano", a su vez, puso de manifiesto la forma en que los nodos urbanos atraen, por medio de su infraestructura (y expulsan como residuos), flujos de agua, energía, comida y un abanico de bienes de consumo (Gandy 2004; Kennedy *et al*., 2007; véase Anand, 2017, en este volumen).

Sin embargo, entre todo lo escrito sobre la infraestructura de la globalización, el trabajo acerca de la "urbanización planetaria" dirigido por Brenner, Christian Schmid y Andy Merrefield constituye el esfuerzo más ambicioso por conceptualizar el carácter urbano de la metrópolis, aunque sin hacer uso de este concepto. Profundamente influidos por Lefebvre, estos autores sostienen que la naturaleza globalizada de la urbanización en el siglo xxi nos obliga a ir más allá de la idea de "ciudad" como un objeto localizado y delimitado, para examinar más bien las complejas formas en que los procesos urbanos están, en palabras de Merrifield (2013: XX), "desvinculándose de sus formas tradicionales de ciudad", y volviéndose

"amorfos" e "inevitablemente policéntricos, "estirados y desgarrados, expandiéndose y formando guetos". Brenner y Schmid (2014), en particular, explican que las manifestaciones urbanas ya no pueden restringirse a su aglomeración en centros urbanos, pues también incluyen lo que denominan "urbanización ampliada": infraestructura y redes que se extienden a zonas de extracción, como las que han sido transformadas por la minería en los Andes (Arboleda, 2016). Esta extensión espacial exige para Brenner (2014) una "teoría urbana sin afuera", que disuelva la distinción urbano-rural y observe las formas diferenciadas y variadas en las que incluso el mar y las montañas son atravesadas por infraestructura.

Este corpus de trabajo ha sido criticado por estudiosos poscoloniales y feministas por ser demasiado "totalizador" y por no considerar lo cotidiano, la diferencia, la localidad y las luchas en la producción de lo urbano (Derickson, 2015 ; Buckley y Strauss, 2016; Peake, 2016). Algunas de estas críticas plantean interrogantes de importancia que nos ayudan a pensar en los límites de la metrópolis, como veremos más adelante. Sin embargo, como argumenta Kanishka Goonewardena (2018), el uso del término *totalizador* para desestimar el trabajo sobre la urbanización planetaria reproduce una formulación problemática entre la idea filosófica de la totalidad, el totalitarismo y el determinismo. Goonewardena demuestra que existe una larga tradición no solo en el marxismo, sino también en el feminismo radical y el pensamiento decolonial que considera "la totalidad social" *de forma relacional*: es decir, no para restar importancia a las diferencias, sino como requisito para "pensar holísticamente" y comprender las diferencias en un marco de relaciones más amplias de dominación. Entendida de esta manera, la totalidad que plantea la urbanización planetaria es crucial para pensar de forma holística el Antropoceno.

Al proponer denominar "metrópolis" a esta tensa constelación de aglomeraciones y extensiones urbanas, este capítulo va más allá de Merrifield, Schmid y Brenner, y hace uso de las teorizaciones sobre este concepto de Negri, Toscano y el Comité Invisible. Lo que este último conjunto de autores aporta al debate es su insistencia en las dimensiones *imperiales* del capitalismo global y la metrópolis, algo que examino en la siguiente sección. El Comité Invisible introduce un concepto importante en la discusión: el

movimiento de estas redes infraestructurales define a la metrópolis como un "continuo global" (2009: 52). El asunto en torno a este continuo es lo que Lefebvre (2003) llamó "la forma urbana", el concepto principal con el que trató de superar la ideología a menudo fetichizada de "la ciudad". Esta forma urbana es mucho más que un "sistema", un término que Lefebvre rechazaba porque "implica cumplimiento y finalización". La forma urbana "no puede alcanzar la finalización" porque "se manifiesta como movimiento" (2003: 173-174). Además, como decía Lefebvre, "lo urbano es evocado con más fuerza por las constelaciones de luz durante la noche, especialmente cuando se sobrevuela una ciudad" (118). Estas constelaciones captan el hecho de que la forma urbana combina las aglomeraciones y extensiones identificadas por Brenner y Schmid (2014). Sin embargo, también muestran un continuo de *materiales urbanos texturizados* (asfalto, cemento, acero, vidrio, plástico, madera) por medio de los cuales las personas, los vehículos y la energía se mueven, congregan y dispersan. Si la vista nocturna del terreno urbano desde un avión se aleja más allá de lo que muestran las imágenes de satélite, vemos una forma más vasta: por ejemplo, la península europea atravesada por racimos de luz y líneas rizomáticas formando un continuo nebuloso a través de las fronteras. Parafraseando a Lefebvre, es en esas imágenes donde las formas urbanas de la metrópolis como un continuo se evocan con más fuerza.

Pero esta imagen de conectividad urbana continua es, al mismo tiempo, engañosa. Para evitar caer en lo que Donna Haraway (1988) llamaría el "truco de Dios" al mirar las imágenes de satélite desde arriba y desde ninguna parte, es crucial examinar las texturas desiguales de la metrópolis sobre el terreno. Esto revela rápidamente que el continuo de la metrópolis es muy selectivo, diferenciado y nunca continuo en su totalidad. Su infraestructura está vigilada de forma estricta y se vuelve violentamente *discontinua* debido a los esfuerzos de los Estados y las empresas para restringir la movilidad de poblaciones no deseadas y racializadas así como el flujo de mercancías ilícitas. El ascenso al poder de Donald Trump en Estados Unidos, el voto del Brexit en el Reino Unido y el auge de los nacionalismos xenófobos confirman que las fronteras y los Estados nación están lejos de desaparecer. Pero es justo la erosión de las fronteras percibida en las movilidades transnacionales y subalternas lo que da lugar

a llamados a la militarización de las fronteras y al auge de la infraestructura de separación. En este sentido, la metrópolis es una estructura descentrada de movimiento y aceleración *y también* una estructura de contención, inmovilidad y lentitud mediante muros y vallas atentamente vigilados.

Cuando Brian Larkin (2013: 329) escribió que "la infraestructura es materia que permite el movimiento de otra materia", se refería, en este sentido, al movimiento vigilado y no codificado del continuo de la metrópolis. En sus expresiones considerablemente diversas, este continuo requiere normalizaciones técnicas, posibles gracias a infraestructura como las bandas de asfalto que permiten que las carreteras suavicen el terreno accidentado (Kernaghan, 2012; Harvey y Knox, 2015); las redes de energía y los oleoductos que canalizan la luz, el gas y el petróleo a través de las fronteras (Bennet, 2010; Barry, 2013); o los cables submarinos por los que fluyen los datos cibernéticos de un continente a otro (Blum, 2012). Este continuo también es posible gracias a la estandarización logística, como el uso de lo que Hannah Appel (2012) denomina formas "modulares" de externalización de servicios y el uso de contenedores del mismo tamaño que pueden transportarse por barco, tren y camión (Cowen, 2014). Las corrientes de objetos ilegales forman parte del continuo, e incluyen el narcotráfico, organizaciones que transportan drogas camufladas mediante infraestructura pública y por infraestructura clandestina de creación propia, como los innumerables túneles que existen bajo la frontera de México y Estados Unidos (Muehlmann, 2013).

Sin embargo, la continuidad de la metrópolis, a pesar de su ímpetu en apariencia imparable, es una conexión en red que puede romperse fácilmente a escala local y regional si sus componentes no pueden ensamblarse de la manera correcta. En septiembre de 2017, las graves perturbaciones que varios huracanes causaron a la infraestructura de Houston, Florida, Puerto Rico y varias islas del Caribe son un claro ejemplo del poder del cambio climático para perturbar nodos clave de las metrópolis y sus patrones de movimiento al impedir que aviones, aeropuertos, barcos, puertos, carreteras, redes y personas pudieran ensamblarse de una manera determinada. La idea de ensamblaje es crucial en este caso para dar sentido a la multiplicidad intrínseca de las metrópolis; por ello, este concepto se ha

utilizado durante mucho tiempo en la literatura sobre infraestructura para destacar que no se trata de entidades homogéneas, sino de asociaciones de diferentes materialidades y tecnologías (véase Collier y Ong, 2005). En palabras de Manuel de Landa (2006), los ensamblajes no tienen esencia y no constituyen una totalidad porque son la agregación temporal de una multiplicidad. La metrópolis, en resumen, no es un objeto ya formado, sino algo que exige para su existencia la articulación de innumerables materiales.

Estos ensamblajes reúnen no solo infraestructura y cuerpos humanos, sino también el terreno del planeta en sus formas sólidas, líquidas y atmosféricas (véase Gordillo, 2018). El mar y la atmósfera, en particular, se han convertido en espacios para la conectividad global sin los que la metrópolis no existiría. El continuo de carreteras, ferrocarriles y oleoductos que operan en tierra continúan por otros medios a los nodos más importantes y de largo alcance del transporte planetario: los puertos y aeropuertos. Partiendo y convergiendo en esos nodos, el continuo de la metrópolis se recrea por medio de miles de barcos y aviones que en todo momento se mueven a través del océano y el cielo. Este continuo también es posible gracias a los numerosos satélites que circulan la tierra y los flujos de datos que atraviesan la metrópolis por medio de cables submarinos, computadoras y cajeros automáticos, como el cajero automático de Las Lajitas, que me permite retirar efectivo de mi cuenta bancaria en Canadá.

Sin embargo, esta conectividad no solo es discontinua, sino también fragmentada, inconexa y extremadamente diversa en las diversas densidades urbanas que la definen. Algunos de los nodos más poderosos de la metrópolis son, sin duda, lo que Saskia Sassen (2001) denomina "ciudades globales" que estructuran los flujos financieros en el ámbito mundial. En el caso de las cadenas de suministro de la soya, esto incluye la influencia destacada de Chicago, sede del Consejo de Comercio de Chicago, donde se establecen los futuros precios de la soya y los cereales. Sin embargo, los nodos de poder de la metrópolis se han globalizado tanto que la vieja distinción entre naciones "centrales" y "periféricas" articuladas por Immanuel Wallerstein (1974) se ha dispersado espacialmente y se ha tornado más nebulosa y fractal. Los nodos urbanos de Sudamérica y Asia, como

São Paulo, Buenos Aires, Rosario, Shanghái o Pekín, ejercen todos diversos grados de influencia en la configuración de las cadenas de suministro de la soya. Con frecuencia, en estos nodos de poder altamente urbanizados, las metrópolis también contienen amplias zonas de pobreza urbana atendidas por infraestructura deficiente o abandonada, encarnada en los barrios marginales de muchas megaciudades de todo el mundo.

A medida que uno se aleja de los nodos de aglomeración más densos de la metrópolis, la urbanización espacialmente extendida creada por la infraestructura, a menudo se vuelve más capilar, dispersa y rural. En las regiones del mundo muy pobladas por pequeños campesinos empobrecidos, como en muchas zonas de América Latina, África y el sur de Asia, los ritmos de la metrópolis se encuentran y son limitados por ritmos locales de otra naturaleza que, aunque son afectados por las formas urbanas y se entrelazan con ellas, en su origen *no* son urbanos, pues parten de un compromiso afectivo y tangible con terrenos agrícolas, boscosos y de montaña. La idea de Brenner sobre una "teoría urbana sin afuera" subraya que estos lugares forman parte de nuestro presente globalizado, pero a costa de silenciar que mucho de lo que sucede en esos sitios no se debe a la urbanización, como señalan sus críticos (Buckley y Strauss, 2016). En su respuesta a estas críticas, Brenner (2017), de hecho, admite que le complace abandonar la idea de una teoría urbana "sin afuera" en aras de la precisión conceptual.

Este es un punto crucial. La metrópolis es una totalidad no totalizadora, en primer lugar, porque existen innumerables lugares "fuera" de ella. Si bien la metrópolis ha sido creada por un sistema capitalista que afecta la totalidad del planeta, sus texturas urbanas forman una configuración de escala inferior a la del mundo. Es decir, si por "fuera" de lo urbano nos referimos a *texturas y ritmos no urbanos*, el mundo está lleno de exteriores a la metrópolis, que son, sin embargo, "los exteriores de un mundo sin afuera": es decir, son zonas que podrán estar fuera del alcance directo de las redes e infraestructura, por ejemplo, el corazón del Chaco argentino que aún tiene bosque, pero que *no* están fuera del alcance del capital. Esto es evidente en el impacto mundial del cambio climático y en los efectos destructivos de la agroindustria en los bosques de Sudamérica.

A pesar de todo su poder, la metrópolis se vuelve más fina y difusa en zonas del mundo que no dirige de forma plena. Estas últimas, sin embargo, no constituyen ni una "naturaleza" prístina ni una ruralidad desconectada de la metrópolis porque "pasar por alto la relación de la ciudad con la naturaleza y el campo es, de hecho, ignorar gran parte de lo que comprende la ciudad" (Cronon, 1991, p. 19; Williams, 1973). Autores como Carse (2012; 2014; este volumen) y Wakefield y Braun (este volumen) han demostrado que la "naturaleza" es regularmente movilizada por la infraestructura. La importancia del océano en las cadenas de suministro es un claro ejemplo de esta indisociabilidad. Pero más que la "naturaleza" o sitios "rurales", lo que los ritmos de la metrópolis perturban son terrenos no urbanos, como los bosques de Argentina.

En los márgenes de la metrópolis

Puede decirse que la infraestructura y las redes urbanizadas que los agronegocios han creado recientemente en torno a Las Lajitas se encuentran "en las márgenes de la metrópolis", pues coexisten en tensión con zonas boscosas habitadas por familias campesinas y aún definidas en gran medida por los ritmos rurales y campesinos. Noventa kilómetros al este de Las Lajitas, las formas urbanas establecidas por la agricultura industrial se desvanecen y se encuentran con un margen o umbral en el sentido físico del término. En el kilómetro noventa, la carretera de grava que parte de Las Lajitas llega a su fin, y la reemplaza un camino de terracería en pésimo estado. En este momento, los campos son sustituidos por bosques. El camino de tierra conduce a través de un terreno densamente arbolado fuera del alcance de la red eléctrica o la cobertura celular. Aquí, los residentes han vivido "en el monte", criando ganado de forma artesanal durante generaciones. Se identifican como gauchos, los vaqueros mestizos que se asentaron en la zona cuando el Ejército argentino, a principios del siglo XX, derrotó y desplazó a los indígenas locales (Gordillo, 2014). Su ruralidad subalterna, en este sentido, no es primordial, sino creada por la expansión territorial del estado. Sin embargo, aunque no están "fuera" de la nación, su distancia de la infraestructura alrededor de Las Lajitas los coloca en una especie de margen. Se trata de un margen poroso y elástico,

que se hace claro cuando observamos que la mayoría de los residentes tienen teléfonos celulares para cuando van a Las Lajitas y su tierra es afectada y amenazada por la frontera de la soya. Debido a lo anterior, esta zona donde los campos dan paso a bosques campesinos es más que un margen; es una zona que representa lo que Anna Tsing (2005) denomina "fricción".

Alrededor de Las Lajitas, la expulsión de los residentes campesinos por la expansión de la agricultura industrial comenzó a finales de las décadas de los setenta y ochenta, cuando empresas de otras regiones de Argentina comenzaron a invertir en el área, atraídas por los beneficios fiscales. Hasta entonces, Las Lajitas era un pueblo con una fuerte identidad gaucha formado en la década de los setenta en torno a una estación de tren. Durante décadas, la principal infraestructura fue el ferrocarril, inaugurado en la década de los treinta, y los caminos de tierra que eran intransitables tras las lluvias torrenciales. El ganado criado en esta región se transportaba en caravanas hacia los mataderos al oeste en las ciudades de Salta y Jujuy y a Chile. Si bien se conectaba a los centros urbanos regionales por medio del ferrocarril, Las Lajitas estaba rodeada de bosques y durante décadas mantuvo un ritmo de paso lento. La primera oleada de desalojos y deforestación de la década de los ochenta y, más tarde, el "*boom* de la soya" destruyeron esta configuración espacial y convirtieron a Las Lajitas en un centro agroindustrial que se expandió hacia el Chaco. Liderado por empresas de otras zonas de Argentina, fue un ejemplo de manual del "acaparamiento de tierras", que aprovechó la carencia de títulos de propiedad de muchos de los pobladores, aun cuando habían vivido allí por generaciones. A pesar de múltiples resistencias, que más adelante describo brevemente, muchos desalojos ocurrieron al ser legitimados por tribunales y funcionarios, y ejecutados con violencia por parte de la policía o de civiles armados.

Figura 2. Una activista documenta la reciente destrucción de

BOSQUES POR TOPADORAS CERCA DE PALMA SOLA, EN LAS TIERRAS BAJAS DE JUJUY, AGOSTO DE 2016. FOTO DEL AUTOR.



La destrucción de estos bosques expropiados se basa en un plan metódico, que comienza con lo que Kregg Hetherington (2014) considera el ejercicio fundacional de la infraestructura: la prospección topográfica del terreno. En primer lugar, los ingenieros reducen la compleja y densa textura del terreno boscoso a una geometría euclidiana de líneas rectas y ángulos. A continuación, el Gobierno de Salta, en función de estos estudios, autoriza el "desmonte" —el derribo de bosques—, que se subcontrata con empresas especializadas en esta tarea. Además de las topadoras y los operadores, estas empresas instalan casas rodantes para los conductores, tanques de combustible y la herramienta principal de destrucción: una cadena extremadamente pesada que mide más de cien metros de largo y cuyos eslabones de acero tienen veinte centímetros de grosor.

Para arrasar una sección relativamente grande de bosque, las topadoras operan en pares unidas por la cadena, formando un ensamble cuya acción

se denomina "cadenear". A medida que las topadoras tiran al unísono y en paralelo, la cadena estruja todo lo que encuentra a su paso, no sólo árboles, sino también mucha fauna silvestre e incluso ganado. Una vez arrasado el bosque, se queman los escombros. A continuación, los trabajadores cavan, retiran, cortan, arrastran, apilan y vuelven a quemar todos los tocones y demás restos, y los desintegran todavía más para allanar el terreno y transformarlo en campos de cultivo (Figura 2).

Los campos se convierten entonces en el medio de una producción mecanizada que requiere de muy pocos trabajadores, pues la siembra de semillas, la pulverización de pesticidas y la cosecha se realizan mediante cosechadoras, algunas de ellas automatizadas y controladas vía satélite. El uso de agroquímicos es crucial en todo el proceso, pues para hacer crecer los campos de soya es necesario rociarlos con herbicidas que matan todas las plantas que crecen allí, con excepción de la soya modificada genéticamente por Monsanto o Syngenta para resistir la toxicidad. La devastación creada por la agroindustria en la región del Chaco no se termina con la deforestación, y continúa cada temporada agrícola, matando pequeños animales, contaminando las reservas de agua y afectando la salud de los pobladores de zonas aledañas, algo que ha sido ampliamente documentado por científicos, activistas y etnógrafos en muchas partes de Argentina (Rulli, 2009; 2016a; 2016b; Vázquez *et al*., 2017). Sin embargo, esta es una destrucción que ha sido silenciada por las empresas y los funcionarios estatales que celebran el valor de la mercancía, la soya, que una vez producida en esos campos se inserta en las cadenas de suministro.

En época de cosecha, entre abril y mayo, las caravanas de camiones incrementan su marcha de Salta a Rosario, donde el auge de la soya produjo un *boom* inmobiliario que expandió la ciudad verticalmente de forma dramática con la construcción de rascacielos y horizontalmente mediante la industrialización de la ribera del Paraná. Entre 2003 y 2006, los gigantes que dominan el mercado mundial de alimentación y logística, así como las corporaciones argentinas, construyeron en torno a Rosario la mayor concentración de manufacturas de molienda y puertos privados del mundo, un proceso

que desalojó a miles de trabajadores-residentes de las orillas del río[4] (Cué, 2015). En la actualidad, las veinte fábricas y diecinueve puertos en torno a Rosario producen la mitad de la harina de soya del mundo. Las fábricas más grandes pueden procesar mil camiones al día. Pero en época de cosecha el volumen de camiones es tal que miles de ellos abarrotan los alrededores de las fábricas, a menudo esperando en fila durante días antes de dejar su carga. Esto confirma la naturaleza transnacional de esta zona de infraestructura, las fábricas de los alrededores de Rosario atraen no solo la soya producida en Argentina, sino también la que desciende por los ríos Paraguay y Paraná en barcas provenientes de Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil.

La urbanización generada por el auge de la soya en esta región de Argentina también se expandió hacia la vasta región agrícola del oeste de Rosario: las pampas o praderas, que en el siglo XX se convirtieron en el corazón agrícola y ganadero del país. Habitadas por inmigrantes europeos, estas praderas se dedicaron durante decenios a la producción de carne de res y trigo para el consumo doméstico y la exportación, pero en la década de los noventa se convirtieron en el epicentro del cultivo de soya en Argentina (Gras y Hernández, 2013a; 2013b; 2016). Valeria Hernández (2009) ha demostrado que esta expansión de la agricultura industrial transformó los pueblos de estas praderas en "agrociudades": centros urbanos modernizados rodeados de granjas mecanizadas e infraestructura al servicio de la agroindustria (carreteras, silos, gasolineras, bancos) con patrones urbanos de consumo (cf. Hernández *et al*., 2013; Hernández, 2013). Una transformación similar se ha observado en los campos de soya en Brasil, donde se ha creado lo que Gustavo Oliveira y Susanna Hecht (2016: 268) denominan "un nuevo urbanismo agroindustrial". En Las Lajitas, este urbanismo agroindustrial está menos desarrollado, pues su crecimiento ha sido limitado y desigual. La mayoría de las calles siguen sin asfaltar, y el hospital y las escuelas públicas carecen de fondos suficientes. En los barrios de clase obrera, la gente de piel oscura vive en la pobreza y depende de trabajos ocasionales y programas sociales. Es sobre todo alrededor del hotel Las Lajitas donde se puede observar la expresión local del urbanismo

4 "Rosario, auge y caída de la Argentina dorada", *El país* 8 de octubre de 2015.

agroindustrial en edificios modernos al servicio de actores corporativos atentos al mercado global.

Una vez procesada industrialmente en los alrededores de Rosario como forraje y aceite (o solo en granos), la soya producida en Las Lajitas se carga rápido en barcos en los puertos cercanos a las fábricas. Los puertos marcan un umbral en la superficie del planeta, pues su presencia indica el final de la solidez de la tierra y el comienzo de un mundo de agua que requiere un medio de transporte diferente: los barcos. Aunque el Paraná es un río ancho que ha funcionado como medio para el comercio durante mucho tiempo, necesita ser dragado de forma regular con maquinaria pesada para hacerlo navegable para los cargueros. Esto forma parte de un ambicioso proyecto de infraestructura denominado la Hidrovía, puesto en marcha por primera vez en la década de los noventa por los cuatro países que forman la cuenca (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y hoy constituye la mayor maniobra de dragado en el mundo[5] (Huergo, 2006). El mantenimiento de esta infraestructura no puede disminuir su velocidad, ya que los sedimentos arrastrados por el Paraná rellenan de manera permanente lo dragado. Así, en la metrópolis, la infraestructura para el transporte, debe luchar permanentemente contra el movimiento no humano del agua y de los sedimentos que fluyen hacia el Atlántico.

Una vez que los buques navegan en el mar, su trayectoria depende de múltiples factores y de las fluctuaciones del mercado. Pequeños cambios en el precio de la soya o cambios políticos alrededor del mundo pueden hacer que las empresas que controlan las cadenas de suministro cambien la trayectoria de los barcos a mitad del camino, redirigiéndolos a destinos ligeramente más rentables (Oliveira y Schneider, 2016: 173). Un buen porcentaje de los barcos que salen de los puertos del río Paraná atracan en puertos del sudeste de China, para atender a uno de los países más urbanizados, industrializados y densamente poblados de la metrópolis. Después la harina de soya se distribuye a miles de granjas para alimentar a la mitad de la población mundial de cerdos. La clase trabajadora china, cuya dieta se basa cada vez más en el cerdo producido parcialmente con

5 Hector Huergo, "La hidrovía abona la inversión", *Clarín*, 2 de septiembre de 2006.

soya de Sudamérica, ensambla a su vez los teléfonos, computadoras y un sinnúmero de productos que luego se envían en contenedores, mediante esos mismos puertos, hacia el mundo entero. En Vancouver, donde vivo, uno puede ver regularmente barcos contenedores que llegan de China y se dirigen al puerto, el más grande de Canadá y un nodo logístico más que mueve materia a través de la metrópolis.

La república unida de la soya: zonas de extracción imperial

En agosto de 2016, para mi sorpresa, me crucé en las calles de Las Lajitas con un grupo de unos diez hombres de aspecto asiático oriental que bajaban de dos camionetas. Lo que los delataba como extranjeros, además de sus rasgos faciales, era que vestían más formalmente que los locales. Todos llevaban pantalones de vestir oscuros y camisas blancas, y algunos llevaban chaqueta. Los acompañaban unos cuantos argentinos. Al principio supuse que eran de una de las mayores empresas estatales de China, China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO). Esta empresa había llegado recientemente a Argentina mediante la compra de Nidera (un líder nacional en semillas y comercio), y de la rama de agronegocios de Noble, un gigante logístico de Hong Kong que controlaba muchas instalaciones en el país, incluido un silo cerca de Las Lajitas. Unos días antes, había visto banderas de COFCO en este silo que antes pertenecía a Noble, señalando públicamente la llegada del capital chino a la región. Sin embargo, poco después esa misma tarde, me encontré de nuevo con esos hombres en el hotel Las Lajitas y me enteré que no eran de COFCO, sino de otra gran empresa china, China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Tras un acuerdo firmado entre China y Argentina, CMEC estaba en proceso de invertir miles de millones de dólares estadounidenses para reparar y modernizar las decadentes vías férreas que conectan el norte de Argentina con las instalaciones de molienda y los puertos de Rosario. Esta ha sido una antigua exigencia de las elites empresariales locales, pues el elevado costo que implica transportar los granos hacia Rosario por camión ocasiona que las explotaciones salteñas sean menos competitivas que las del centro de Argentina. El equipo chino que visitó Las Lajitas lo conformaban ingenieros que, guiados por funcio-

narios argentinos, inspeccionaban el estado de deterioro de los ferrocarriles argentinos para preparar su radical remodelación. Mientras cenaban a pocos metros de mí, la mitad de ellos atendían sus celulares, comunicándose con centros urbanos situados a miles de kilómetros de distancia y aprovechando el continuo de la metrópolis.

Si bien la inversión china en esta región de Argentina es aún relativamente escasa, la presencia de esos ingenieros, así como la reciente adquisición de silos cerca de Las Lajitas por parte de cofco, indica que parte de la infraestructura regional de las cadenas de suministro pertenece y es reparada por actores y capitales radicados en nodos asiáticos de la metrópolis. No fue una coincidencia que la delegación china se alojara en el hotel Las Lajitas, compartiendo el restaurante con la clientela habitual de este hotel: algunos visitantes estadounidenses y europeos, pero sobre todo hombres blancos argentinos, procedentes normalmente de Salta, Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, que permanecen unos días para supervisar las fincas administradas o atendidas por sus empresas o para vender semillas y herbicidas a los agricultores y comprar sus cosechas. En este sentido, el hotel y los edificios modernos que lo rodean se han convertido en nodos políticos cruciales que encapsulan a las nuevas jerarquías que existen en Las Lajitas. Aunque la mayoría de los habitantes descienden de gauchos que criaban ganado en el bosque, el poder en el ayuntamiento, el hospital, y la escuela de agronomía, lo ostentan hombres y mujeres blancos que llegaron de otras partes de Argentina. Esta elite celebra de manera regular reuniones en "el hotel", lo cual es visto por los residentes como la encarnación de las nuevas relaciones de poder que conectan a Las Lajitas con el mundo. Estas relaciones no son solo capitalistas, sino que responden también a jerarquías espaciales de carácter imperial.

En su libro *Imperio*, publicado en 2000, Michael Hardt y Antonio Negri argumentaron que la expansión globalizadora del capitalismo que siguió al colapso del comunismo marcó el debilitamiento de la soberanía de los Estados nación, la desaparición de los imperialismos centrados en las naciones y el surgimiento del sistema planetario y descentralizado de soberanía capitalista "sin afuera" que denominaron "imperio" (Hardt y Negri, 2000). Este provocador argumento creó una serie de debates y muchos autores se

apresuraron a criticar la noción de "imperio" como una abstracción totalizadora, incapaz de explicar la complejidad heterogénea del mundo y el poder constante de los Estados nación y los imperialismos nacionales (Brennan, 2003; Reyna, 2002; Ong, 2012). Anna Tsing, en particular, argumentó que la idea de un imperio "sin afuera" reduce el capitalismo global a un "objeto unitario y homogéneo" y omite que las cadenas de suministro a menudo dependen de diferencias y especificidades locales que no se basan en relaciones capitalistas (2012: 37-38; cf. 2015: 65). El fenomenal auge de China y la popularidad paralela de los nacionalismos xenófobos revelan además que el mundo está más desarticulado de lo que el libro *Imperio* podría haber previsto. Sin embargo, a pesar de los límites de su análisis, lo que Hardt y Negri visibilizan, y que vale la pena redefinir sobre líneas más materialistas, es que la globalización capitalista posee una dinámica imperial más descentralizada que las que definían los imperialismos clásicos de base nacional. No obstante, en lugar de hablar de "imperio", prefiero subrayar las dimensiones *imperiales* de las cadenas de suministro, es decir, que están estructuradas por jerarquías espaciales *de amplio rango* que capturan recursos para nodos de poder en el mundo a expensas de zonas de sacrificio.

El hecho de que nodos urbanos ubicados en diferentes continentes, como Rosario, Shanghái y Chicago, se beneficien de la devastación de los bosques de Sudamérica sugiere que si bien los Estados nación y el imperialismo ciertamente forman parte de estas redes, se subordinan a la constelación imperial que los supera y los constriñe: la metrópolis. Anna Tsing (2012; 2015) sugiere que estudiar cómo operan las cadenas de suministro en el terreno proporciona un "antídoto" a las abstracciones del imperio de Hardt y Negri. Pero podría argumentarse que el carácter local y las trayectorias de las cadenas de suministro —en especial aquellas de alcance planetario— nos permiten apreciar mejor la naturaleza imperial de la globalización, cuyos extensos esquemas de urbanización pueden describirse como aparatos imperiales de captura. Estos aparatos producen un "entorno hostil" que en algunas partes del mundo adquiere una mayor densidad física que otras (Tiqqun, 2011: 171). Esta densidad crea lo que yo llamo "zonas de extracción imperial": regiones del planeta con una alta densidad de infraestructura creada para satisfacer, como alguna vez lo expresó Mumford, "la boca voraz de la metrópolis" (1989: 539).

Estas zonas son discontinuas entre sí y se reparten por todo el mundo: las arenas bituminosas de Canadá; las minas a cielo abierto en los Andes, los Apalaches o Papúa Nueva Guinea; o los vastos nodos de extracción de petróleo en el golfo de África, el golfo de México o la Amazonia occidental. Andrew Barry (2006) destaca la estandarización técnica de estas áreas denominándolas "zonas tecnológicas". Pero estas zonas fomentan un tipo de territorialidad claramente imperial, pues si bien están limitadas por los Estados nación que las acogen, están más sometidas que otras zonas al poder del capital global. Stuart Elden (2010; 2013a) articuló una teoría del territorio que las concibe no como un "espacio" sino como "tecnologías" político-jurídicas leyes, encuestas, censos y elaboración de mapas para el control del terreno. En el caso de las zonas de extracción imperial, las principales tecnologías jurídico-territoriales para su expansión han sido el libre comercio y las desregulaciones y privatizaciones neoliberales de las últimas décadas, que han maximizado el poder del capital para controlar el terreno al anular los derechos de los pueblos y los gobiernos locales. No obstante, se ha utilizado un conjunto más concreto de armas territoriales en la producción de estas zonas: la infraestructura y la logística.

En este sentido, las carreteras, los silos y las granjas alrededor de Las Lajitas forman parte de una de las mayores zonas de extracción imperial de la tierra: las tierras bajas de Sudamérica. Esta zona se expandió rápido por todo el continente después de que Argentina autorizó a Monsanto en 1996 vender en el país sus semillas de soya genéticamente modificadas y su herbicida estrella Roundup, siendo uno de los primeros países del mundo en hacerlo. Utilizando a Argentina como punta de lanza, en pocos años las semillas y pesticidas de Monsanto se expandieron y se apoderaron de gran parte de las tierras bajas de Sudamérica (Robin, 2010). Con el apoyo de los gobiernos neoliberales y de centroizquierda del continente, esta zona de extracción fue la hija de las empresas químicas que dominan el mercado mundial de semillas genéticamente modificadas y pesticidas: Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, DuPont y basf, un grupo que está atravesando un rápido proceso de mayor concentración. La reciente fusión entre Dow y Dupont, la adquisición de Monsanto por Bayer, y la compra de Syngenta por ChemChina señalan el endurecimiento de este oligopolio y la creciente presencia del Estado chino en el abanico de los actores beneficiados de esta zona.

Esta zona agroindustrial en el corazón de Sudamérica forma un vasto archipiélago que se extiende hacia el norte desde el centro de Argentina hasta la Amazonia en Brasil, que es la principal fuente de soya del planeta y genera casi 60% de la producción mundial. En una conocida campaña publicitaria, el gigante agroquímico suizo Syngenta (ahora controlado por ChemChina) representó la existencia de esta zona transnacional en el mapa imaginario de "la república unida de la soya" que abarca gran parte de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y las tierras bajas de Bolivia, con el eslogan de "la soya no conoce de fronteras". Esta vasta zona es geográfica y culturalmente muy diversa, y ciertas subregiones cultivan variedades específicas de soya (Mier y Giménez, 2016). Sin embargo, las explotaciones de soya de los alrededores de Las Lajitas funcionan de manera similar a las de Brasil o el centro de Argentina, ya que todas siembran soya genéticamente modificada, utilizan grandes cantidades de pesticidas y dependen de operaciones mecanizadas que contratan muy pocos trabajadores (cf. Oliveira y Schneider, 2016).

Mientras en zonas de extracción imperial que implican la minería a cielo abierto la producción suele estar a cargo de empresas multinacionales, en la "república unida de la soya", el cultivo de esta leguminosa está en gran parte en manos de empresas y agricultores argentinos, brasileños o uruguayos. No obstante, la acción de estos actores nacionales la limita uno de los conglomerados empresariales más poderosos del mundo: las empresas logísticas y comerciales que controlan las cadenas de suministro de soya y cereales y que venden sus insumos (semillas, pesticidas, seguros, asistencia técnica) a los agricultores y compran sus cosechas. De estas empresas altamente globalizadas, las más poderosas son adm (Archer Daniel Midlands), Bunge, Gargill y Dreyfus, un grupo conocido en conjunto como abcd. Estas empresas desempeñaron un papel decisivo en la creación de esta zona de extracción en la década de los noventa, cuando las políticas de desregularización neoliberales les permitieron apoderarse de gran parte del sector de la molienda, el comercio y la logística en Sudamérica, desgastando la importancia anterior de las empresas nacionales y públicas en este mercado (Oliveira y Hecht, 2016: 257). La incorporación más reciente a las cadenas de suministro de empresas con sede en Asia, lideradas ahora por cofco, está descentralizando estas formas globalizadas de poder.

Como señala Tsing (2015), las empresas globales deben realizar una labor de traducción cultural para trabajar con los diversos actores sociales con quienes interactúan en las distintas fases de las cadenas de suministro. En otras palabras, el montaje de las cadenas de suministro no es un proceso mecánico de arriba abajo, sino que demanda sensibilidad a las especificidades locales y a las diferencias culturales. En Sudamérica, varios etnógrafos, entre quienes me incluyo, han observado esta sensibilidad entre agentes locales de empresas como Cargill o Bunge. Estos agentes intentan ganarse la confianza de clientes potenciales adaptándose a sus prácticas y ritmos culturales y contribuyendo con las instituciones locales mediante donaciones y la organización de actos sociales (Wesz, 2016; Leguizamón, 2016; Oliveira y Hecht, 2016). Sin embargo, estas adaptaciones localizadas, como demuestran Valdemar João Wesz Jr. (2016) y Amalia Leguizamón (2016), no modifican el actuar de estas empresas globales que operan en Brasil y Argentina de formas muy similares. Todos ellos imponen prácticas oligopólicas que dejan a los agricultores y a las medianas empresas agrícolas con escaso espacio para maniobrar. Debido a esto, la mayoría de los agricultores y administradores con los que hablé tienden a sentirse molestos con los conglomerados globalizados que controlan el mercado.

Comprender cómo operan estas empresas comerciales mediante la multiplicidad de la superficie planetaria es clave para apreciar la naturaleza imperial de sus estrategias. Todas estas empresas comparten una estrategia de integración vertical por medio de la cual controlan las diferentes fases de la cadena en docenas de países diferentes. Una vez que compran las cosechas a los agricultores, tanto el grupo abcd como otras empresas movilizan sus vastas redes de puertos, barcos y silos para organizar su almacenamiento, el procesamiento industrial y el transporte a su destino en nodos asiáticos, europeos o africanos de la metrópolis (Figura 3). A lo largo del proceso, estas empresas se guían por un campo de visión planetaria que se articula claramente, por ejemplo, en la página electrónica de Noble Group, la corporación logística con sede en Hong Kong. En 2013, cuando era propietaria de un silo cerca de Las Lajitas antes de venderlo a cofco, Noble ocupaba el número 73 en la lista de Fortune 500 y destacaba entre los gigantes de logística al ser la primera compañía en tener su sede en Asia. Para Noble, la soya que almacenaba en sus instalaciones cerca de Las Lajitas es una de las muchas materias primas

—desde el mineral de hierro o el gas natural y el petróleo— que transporta y procesa alrededor del mundo. El sitio electrónico de la empresa se jactaba de las trayectorias planetarias y jerarquizadas movilizadas mediante silos como los de Argentina: "Conectamos países productores a bajo costo con mercados de alta demanda en crecimiento". El sitio también destacaba la "diversificación" geográfica de la empresa, refiriéndose a su "alcance planetario y multiplicidad espacial", considerada "crucial" para superar "tiempos de incertidumbre": "Por ejemplo, podemos abastecernos en cualquier momento de productos agrícolas de Argentina o de Ucrania, productos de hierro de India, Mongolia o Brasil, productos de carbón de Colombia, Australia o Indonesia".[6] Esto es lo que las corporaciones logísticas llaman "agilidad" (Bernes, 2013). Esta espacialidad "ágil" es imperial dada su capacidad de *mover* en cualquier momento *cualquier* mercancía a casi cualquier lugar del mundo.

Figura 3. Un camión recibe su carga de soya en la planta de acopio de Cofco, en Piquete Cabado. Foto del autor.



6 Noble Group, consultado en diciembre de 2013, http://www.thisisnoble.com.

Como muestra Deborah Cowen (2014), esto significa que la logística global prioriza *la seguridad de las corrientes globales* sobre las formas nacionales de control, impulsando esquemas de control imperiales y transnacionales. "En lugar de fronteras territoriales en los límites del espacio nacional que garantizan la soberanía del Estado nación, una nueva cartografía de seguridad pretende proteger las redes globales de circulación" (p. 69). Y aunque las fronteras no desaparecen, "son sustituidas por redes trasnacionales, flujos y nodos urbanos" (69). En el caso de las cadenas de suministro de la soya, la destrucción creada en los bosques de Sudamérica por las prácticas e infraestructura que Bunge, Cargill o cofco movilizan para extraer y transportar harina de soya por todo el mundo implican a tantos actores transnacionales, que no puede decirse que respondan al "imperialismo estadounidense" o al "nacionalismo chino". Para ser claros, las agendas imperialistas y nacionalistas en tensión son parte integral de las corrientes desarticuladas de la metrópolis. El gobierno estadounidense, por ejemplo, ejerce una presión permanente sobre las naciones sudamericanas para favorecer a Monsanto y a otras empresas estadounidenses. Mientras las empresas estatales chinas que operan en las cadenas de suministro de la soya, como cofco y Chem China, persiguen la agenda nacionalista del Estado chino con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria (a diferencia de sus competidores privados) (Stevenson *et al*., 2016). No obstante, las tierras bajas de Sudamérica se han transformado en una zona de extracción imperial, no por Estados nación particulares, sino por una constelación más transnacional, dispersa y nebulosa de actores y operaciones logísticas que buscan obtener forrajes, petróleo y frijoles baratos, sin importar el costo social o ambiental. Estas corporaciones están tan entretejidas que a menudo cooperan en lugar de competir. La inversión de China para la reparación de las vías de ferrocarril entre Las Lajitas y Rosario beneficiará, después de todo, no solo a los consumidores chinos, sino a toda la cadena de materias primas.

Como ha argumentado Aihwa Ong (1999), los actores locales y los Estados nación pueden influir de forma definitiva en la configuración de los patrones espaciales de la globalización. Asimismo, las zonas de extracción imperial son profundamente afectadas por las diferencias nacionales. El auge

explosivo de un conglomerado infraestructural de fábricas y puertos en torno a Rosario durante 2003-2006 fue, por ejemplo, producto de los esfuerzos de la administración de centroizquierda del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) para crear una industria para la molienda en suelo argentino. En concreto, su Gobierno instauró una política fiscal diferencial para las exportaciones de soya, que disminuyó ligeramente los impuestos sobre la harina y el aceite de soya en relación con la soya sin procesar. Este menor gravamen para la soya industrializada logró atraer grandes inversiones de los conglomerados globales hacia las fábricas de molienda y convertir rápidamente a Argentina en el primer exportador mundial de aceite y harina de soya. Brasil, en cambio, exporta la mayor parte de su producción de soya en frijol por la razón inversa: sus impuestos son más bajos para las exportaciones no industrializadas (Wesz, 2016: 292). Esta política territorial del Estado brasileño significa que la soya cosechada en la Amazonia se muele en fábricas de Asia, lo que confirma cómo las diferencias nacionales afectan la composición de las cadenas de suministro.

Algunas empresas argentinas se han convertido en actores fundamentales para la subordinación de esta zona de Sudamérica a la metrópolis, lo que revela la agencia de los actores nacionales en estas cadenas. Por ejemplo, en Las Lajitas, a pesar de la fuerte presencia de Cargill y Bunge en la zona, el principal comprador de las cosechas locales es la empresa argentina agd, Aceitera General Deheza. Y el principal vendedor local de semillas genéticamente modificadas es Don Mario, una empresa argentina que posee los derechos para producir semillas con la tecnología Monsanto. Además, estas empresas han desarrollado una estrategia transnacional que les ha permitido expandir sus operaciones a países vecinos como Brasil y trabajar en estrecha colaboración con las corporaciones que dominan el mercado global (Craviotti, 2016). Algo similar ocurre en Brasil, donde la agroindustria más poderosa del país, Amaggi, ha construido un puerto cerca de Rosario. En resumen, la infraestructura de estos aparatos de captura en Sudamérica también es producida y controlada por corporaciones radicadas en el continente (*Infocampo*, 2016).

Este solapamiento dentro de Argentina de diferentes tecnologías de control territorial por parte de empresas nacionales, corporaciones transnacionales

y el Estado a menudo genera conflictos. En marzo de 2016, por ejemplo, Monsanto comenzó a establecer puestos de control en las fábricas y puertos alrededor de Rosario para someter a los camiones que ahí llegan al tipo de controles que suelen realizar los funcionarios o la policía. En estos puestos de control, los agentes de Monsanto analizaron los granos en busca de rastros de su soya denominada *intacta* (genéticamente modificada para resistir a los insectos) y cobrando a los agricultores que no habían pagado las regalías (*La Nación*, 2016). Cabe destacar que esto lo hicieron en colaboración con las empresas propietarias de las instalaciones para la molienda. Sin embargo, esta apropiación corporativa de los derechos de la policía desató una gran controversia y la protesta de agricultores y funcionarios obligó a Monsanto a dar marcha atrás. No obstante, el trasfondo de la historia fueron los esfuerzos de Monsanto para forzar un cambio en la legislación argentina sobre semillas, que, a diferencia de la legislación estadounidense o brasileña, no permite a las empresas reclamar semillas genéticamente modificadas como propiedad privada sujeta a regalías. De forma irónica, aunque Argentina es un nodo crucial en esta zona de extracción imperial, es (al menos por ahora) uno de los últimos bastiones del principio de que las semillas deben ser parte de los bienes comunes: no son propiedad de nadie, todos pueden utilizarlas. Esta diferencia clave en la "república unida de la soya" existe gracias a los movimientos sociales que tanto han luchado para mantener a las semillas libres de patentes.

En la primera década del siglo, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fomentaron el auge de la soya como fuente de progreso nacional, desarrollo y justicia social. Redistribuyen parte de la riqueza generada por los impuestos a la exportación de la soya, al financiamiento de los programas sociales que sostuvieron su popularidad entre los pobres, al menos en los primeros años del auge. Cuando estaban en el poder, Cristina Kirchner y otros presidentes de centroizquierda de Sudamérica como Lula da Silva en Brasil, celebraron la expansión del agronegocio como una fuente de orgullo nacional en contraposición al "imperialismo estadounidense". Pero su complicidad con los altos niveles de desposesión, violencia y destrucción en el corazón indígena y mestizo del continente ha hecho de los expresidentes Kirchner y Lula lo que podría llamarse "antimperialistas para el

Imperio": es decir, líderes que pueden haber puesto límites al imperialismo estadounidense en Sudamérica, pero que lo hicieron abrazando los ritmos extractivos de la metrópolis.

El Gobierno abiertamente derechista que rige en Argentina desde finales de 2015 ha apostado aún más en el extractivismo al reducir de inmediato los impuestos sobre las exportaciones de soya y considerar los intereses de la agroindustria como una política oficial. Sin embargo, el legado negativo de dos décadas de deforestación, desalojos, violencia y envenenamiento también ha generado movimientos sociales vibrantes y comprometidos que se enfrentan al poderoso *lobby* del agronegocio.

Interrupción de las cadenas de suministro de la soya

El hecho de que las distintas fases de la cadena de suministro requieran la reproducción de ensamblajes localizados significa que las protestas en contra de los agronegocios en Argentina han intentado interrumpir y desarticular los mismos ensamblajes. En las zonas boscosas del Chaco, los intentos de interrupción comienzan en cuanto las topadoras intentan avanzar contra el bosque y las casas de la gente. Las luchas contra los desalojos se libran en múltiples frentes, donde intervienen los tribunales, los medios de comunicación y las protestas en las calles de las ciudades cercanas. Pero la mayoría de las personas que luchan contra la deforestación lo hacen con sus propios cuerpos, colocándose en el camino de las topadoras para exigir que detengan su avance. En esta guerra de baja intensidad, los residentes han llegado a quemar topadoras para defender sus hogares, y muchas personas que conozco permanecen en sus tierras determinadas a no moverse. Otros han sido encarcelados, heridos o muertos; doce personas han sido asesinadas en los últimos años por defender sus tierras en las fronteras de los cultivos de soya del norte de Argentina (Aranda, 2015).

También han proliferado los bloqueos de carreteras en las protestas contra la agroindustria. Esto ha incluido bloqueos para interrumpir la construcción de nodos de infraestructura de algunas de las empresas más poderosas del mundo. La derrota más notable sufrida por Monsanto

en Argentina, por ejemplo, fue la imposibilidad de construir lo que se anunciaba como su mayor fábrica en América Latina: una instalación de alta gama en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, donde la empresa tenía la intención de producir semillas de maíz transgénico. Debido a temores fundados de que la fábrica esparció polvo tóxico en sus casas, los residentes se organizaron y bloquearon la puerta e interrumpieron la construcción durante tres años (2013-2016). A pesar de la hostilidad de los medios de comunicación y de los ataques de la policía y de matones, la determinación de los vecinos por defender el bloqueo generó una fuerte campaña de solidaridad nacional e internacional que finalmente obligó a Monsanto a abandonar el proyecto (La Vaca, 2016).

En el anillo agroindustrial que rodea Rosario, los trabajadores sindicalizados que laboran en la molienda con frecuencia han hecho valer su poder en este cuello de botella de la cadena de suministro bloqueando el acceso a las fábricas y a los puertos durante las huelgas, cerrando así el flujo de frijoles, aceite y harina de soya hacia afuera del país (Santucho y Genoud, 2016). Estas protestas recuerdan que la infraestructura requiere mano de obra que tenga el poder de cerrar el continuo. Como sostiene Toscano (2011), en la era neoliberal, cuando la mayoría de los trabajadores han sido deslocalizados y reducidos, los trabajadores a cargo de nodos logísticos se encuentran empoderados dado su control parcial de la infraestructura (cf. Mitchell, 2011; Cowen, 2014). Alrededor de Rosario, la capacidad de los trabajadores para cerrar los puertos los ha convertido en unos de los mejores pagados de Argentina.

No todas las interrupciones que ralentizan o perturban las cadenas de suministro son producto de acciones políticas humanas. En Las Lajitas, una preocupación recurrente entre administradores e ingenieros agrícolas es el creciente número de "supermalezas" que se vuelven resistentes a los herbicidas. Estas formas de vida no humanas se han tornado tan resistentes y expansivas que amenazan con desbordar campos de soya e interrumpir el ritmo productivo de las explotaciones. En el río Paraná, eventos circunstanciales generados por el devenir del terreno, como la formación de un banco de arena, pueden crear enormes atascos que involucran decenas de cargueros de 30 000 toneladas. En marzo de 2014,

por ejemplo, un buque encalló en el Paraná cerca de Rosario e inmovilizó ochenta buques, paralizando las exportaciones durante diez días (De los Santos, 2014). Estas son interrupciones contingentes generadas por encuentros entre objetos creados por humanos y la profundidad cambiante de un río; sin embargo, confirman que, con todo y su poder, la metrópolis es un conjunto de multiplicidades que siempre están implicadas y afectadas por los matices del terreno.

Conclusiones: la era de la metrópolis

La noción de Antropoceno ha sido importante para debatir el impacto disruptivo del cambio climático, pues subraya el hecho de que el mundo es una totalidad interconectada. Se trata de una totalidad en el sentido inmanente del término, ya que ninguna parte del planeta ni ninguna de sus formas de vida son inmunes al calentamiento de la atmósfera. El Antropoceno es, en otras palabras, una forma de admitir que "no hay ningún afuera" de las disrupciones producidas por el cambio climático. En este capítulo he querido contribuir a los debates sobre el Antropoceno al subrayar que la atmósfera se está calentando no sólo a causa del capitalismo, sino también debido a su encarnación en la metrópolis, "un flujo de seres y cosas, una corriente que circula por redes de fibra óptica, vías de ferrocarril de alta velocidad y cámaras de videovigilancia, asegurando que el mundo continúe corriendo directo hacia su propia ruina" (Invisible Committee, 2009: 58-59).

Las trayectorias de las cadenas de suministro de soya que afectan a Argentina nos recuerdan que la configuración actual de la metrópolis fue producida por la fenomenal urbanización de China y su transformación en una fábrica planetaria para el capital global, así como por la resultante succión de voluminosos flujos de recursos para permitir la expansión de la urbe. El Estado chino ha adoptado desde entonces un papel aún más enérgico en la expansión de la metrópolis al convertirse en el mayor constructor de infraestructura del mundo: desde la "Nueva Ruta de la Seda" que atraviesa Asia central, hasta su inversión masiva en minas, puertos, ferrocarriles y presas en el sur de Asia, África, Oceanía y América Latina. La reparación

de las vías de ferrocarril en torno a Las Lajitas es solo una muestra de la presencia planetaria del capital chino. Si bien la agenda nacionalista detrás del impulso a la infraestructura china ha generado fricciones con otras potencias mundiales, no es en absoluto incompatible con los aparatos imperiales de captura del capitalismo global. Al contrario, China "no está afuera" de estos aparatos. Las enormes zonas industriales que existen al sureste de China dedicadas a producir objetos para la metrópolis bajo condiciones de intensa explotación también son, después de todo, zonas de extracción imperial. Estas zonas donde los capitalistas más poderosos de la tierra solicitan a China que les proporcione mano de obra barata, dócil e industriosa. La metrópolis puede tener hoy un motor chino, pero sus aparatos de captura siguen siendo rizomáticos e imperiales.

En su multiplicidad e inmensidad irrepresentables, la metrópolis ciertamente no se reduce a sus dimensiones destructivas y explotadoras. La infraestructura que proporciona agua potable, energías renovables, saneamiento, servicios de salud, educación o transporte público es fundamental para la producción de formas colectivas y equitativas de bienestar. Y como insisten Lefebvre (2003), Negri (2018), Merrifield (2013) y Harvey (2012), la metrópolis es un espacio de encuentros lleno de potencial solidario y revolucionario: un terreno en red que, al poner a millones de personas en estrecha proximidad y ayudarlas a comunicarse más allá de las fronteras, puede crear solidaridades transformadoras. En palabras de Hardt y Negri: "La metrópolis es una fábrica para la producción de bienes comunes" (2009: 250).

En una metrópolis estructurada por formas capitalistas de aceleración, la defensa de los bienes comunes surge con fuerza particular en los intentos populares para interrumpir el ensamblaje de la infraestructura que reproduce esta aceleración. La estrategia de interrupción con la que la gente en Argentina trata de frustrar el avance de las topadoras refleja, en este sentido, la estrategia de muchos movimientos sociales de todo el mundo. Ejemplos bien conocidos son el bloqueo que veinticinco mil manifestantes realizaron del puerto de Oakland, en California, en noviembre de 2011, tras la represión policial de Occupy Oakland; el auge de bloqueos realizados por indígenas en Norteamérica para interrumpir la expansión de oleoductos y otra infraestructura relacionada con los combustibles fósiles, a lo que Naomi Klein (2015)

llama "blockadia"; o el bloqueo de refinerías de petróleo en Francia en 2015 por trabajadores que se oponían al menoscabo de sus derechos laborales. Joshua Clover (2016) ha argumentado que la creciente popularidad de los bloqueos en todo el mundo significa que la lucha anticapitalista dominante ya no es la huelga, sino los "disturbios" a la circulación. El Comité Invisible sostiene, además, que las insurrecciones deben implicar el bloqueo y sabotaje de la infraestructura de la metrópolis, así como el descarrilamiento de su flujo incesante de materia. En sus propias palabras, "el poder es logístico. ¡Bloquéalo todo!" (Invisible Committee, 2015: 81).

No obstante, Alberto Toscano (2011; 2014), ha criticado este énfasis excesivo en el bloqueo y la interrupción en la izquierda radical. Sostiene que cualquier intento por ir más allá del capitalismo deberá enfrentar el hecho duro de que las cadenas de suministro no pueden simplemente cerrarse sin más porque, en primer lugar, el sustento de millones de personas depende de su continua movilidad. Demandar el cierre de la metrópolis, escribió, es "convertir la ruptura en una especie de fetiche" (2011: 2). La infraestructura y las operaciones logísticas de la metrópolis, argumenta Toscano, deberían más bien reconfigurar hacia nuevos fines: satisfacer usos y necesidades colectivas en lugar de ganancias privadas. A su vez, Bernes critica a Toscano contrargumentando que la explotación y la interrupción son tan constitutivas de las cadenas de suministro, tan centrales en su diseño, como armas imperiales, que su apropiación para fines igualitarios es inviable, añadiendo que los bloqueos no son suficientes. Lo necesario, más bien, es una "desvinculación de la fábrica planetaria" que permita a las comunidades locales organizarse para cortar su dependencia de las cadenas de suministro (2013: 11). Este acto de retirada "es un asunto de sobrevivencia", escribe Bernes.

Estos debates son polifacéticos e irrefutables en abstracto. Sin embargo, las luchas contra el impulso extractivista de la metrópolis a menudo implican una combinación de interrupciones, disoluciones, apropiaciones y creaciones positivas. Activistas de toda Argentina se enfrentan al agronegocio no solo mediante bloqueos, sino también mediante esfuerzos para crear áreas agrícolas diferentes, cortando con las cadenas de suministro de semillas transgénicas, agroquímicos y forrajes. Adoptan una agricultura orgánica y socialmente consciente, la agroecología, para cultivar alimentos

para personas que viven en pueblos y ciudades de la región. Estos esfuerzos se retiran de algunas cadenas de suministro, pero sin retirarse de la metrópolis; más bien, abrazan su potencial colectivo y explotan las conectividades de su continuo para forjar lazos con movimientos sociales de otras partes del mundo.

No obstante, el cuestionamiento político de la metrópolis como la infraestructura de crecimiento acelerado del Antropoceno nos enfrenta al futuro sombrío que insinúa, confirmando lo que Hetherington y Jeremy Campbell (2014: 193) sostienen acerca de la infraestructura: que "siempre tiene que ver con el futuro, o con distintos futuros". En medio del agravamiento de la polarización de clases, el racismo, las perturbaciones atmosféricas y la toxicidad ambiental que definen esta primera fase del Antropoceno, no sorprende que, en el cine y la cultura popular, el futuro se evoque como una catástrofe donde la gran infraestructura y los rascacielos de la metrópolis se reducen a enormes montañas de escombros. Cualquier intento colectivo por crear un futuro *distinto* a la ruina planetaria tendrá que afrontar, en este sentido, que la desarticulación de las relaciones imperiales y capitalistas requerirá de la reinvención de la metrópolis como una constelación colectiva cuya existencia no dependa de la creación de zonas de sacrificio.

Referencias[7]

Arboleda, M. (2016). Spaces of extraction, metropolitan infrastructures: Critical notes on the state and logistics. Antipode, 48(2), 233–252.

Anand, Nikhil. 2017. *Hydraulic City: Water and the Infrastructures of Citizenship in Mumbai*. Durham: Duke University Press.

Appadurai, Arjun. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

7 N. de T.: Se ha respetado todas las fuentes originales en esta lista de referencias y fueron completadas algunas referencias a las que les faltaba algún dato. Todas las referencias fueron actualizadas al formato de citación APA.

Appel, Hannah. 2012. "Offshore Work: Oil, Modularity, and the How of Capitalism in Equatorial Guinea." *American Ethnologist* 39 (4): 692-709.

Aranda, Darío. 2015. *Tierra arrasada*. Buenos Aires: Sudamericana.

Barry, Andrew. 2006. "Technological Zones." *European Journal of Social Theory* 9 (2): 239-253.

———. 2013. *Material Politics: Disputes Along the Pipeline*. London: Wiley-Blackwell.

Bennet, Jane. 2010. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham: Duke University Press.

Bernes, J. (2013). Logistics, counterlogistics, and the communist prospect. *Endnotes*, *3,* 172–201.

Buckley, M., & Strauss, K. (2016). With, against and beyond Lefebvre: Planetary urbanization and epistemic plurality. Environment and Planning D: Society and Space, 34(4), 617-636.

Blum, Andrew. 2012. *Tubes: Journey to the Center of the Internet*. New York: Ecco.

Brennan, Timothy. 2013. "The Empire's New Clothes." *Critical Inquiry* 29 (2): 337-367.

Brenner, Neil. 2013. "Theses on Urbanization." *Public Culture* 25 (1): 85-114.

———. 2014. "Introduction: Urban Theory Without an Outside." In *Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization*, edited by Neil Brenner, 14-30. Berlin: Jovis.

———. 2017. *Critique of Urbanization: Selected Essays*. Basel: Birkhäuser.

Brenner, N., y Schmid, C. (2014). The "Urban Age" in Question. In N. Brenner (Ed.), Implosions/Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization (310-337). Berlin: Jovis Verlag.

Carse, Ashley. 2012. "Nature as Infrastructure: Making and Managing the Panama Canal Watershed." *Social Studies of Science* 42 (4): 539-563.

———. 2014. *Beyond the Big Ditch: Politics, Ecology, and Infrastructure at the Panama Canal*. Cambridge: MIT Press.

Castells, Manuel. 2010 (1996). *The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol. 1: The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.

Clover, Joshua. 2016. *Riot. Strike. Riot: The New Era of Uprisings*. London: Verso.

Collier, Stephen, and Aiwa Ong. 2005. "Global Assemblages, Anthropological Problems." In *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems*, edited by Aiwa Ong and Stephen Collier, 3-21. New York: Wiley-Blackwell.

Cowen, Deborah. 2014. *The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Craviotti, Clara. 2016. "Which Territorial Embeddedness? Territorial Relationships of Recently Internationalized Firms of the Soybean Chain." *Journal of Peasant Studies* 43 (2): 331-347.

Cronon, William. 1991. *Nature's Metropolis: Chicago and the Great West*. New York: Norton.

Derickson, K. D. (2015). Urban geography I: Locating the urban. *Progress in Human Geography*, *39*(5), 647-657.

DeLanda, Manuel. 2006. *A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity*. New York: Continuum.

Easterling, Keller. 2014. *Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space*. London: Verso.

Elden, Stuart. 2010. "Land, Terrain, Territory." *Progress in Human Geography* 34: 799-817.

———. 2013. *The Birth of Territory*. Chicago: University of Chicago Press.

Gandy, Matthew. 2004. "Rethinking Urban Metabolism: Water, Space and the Modern City." *City* 8 (3): 363-379.

Gordillo, Gastón. 2014. *Rubble: The Afterlife of Destruction*. Durham: Duke University Press.

Gordillo, Gastón. 2018. "Terrain as Insurgent Weapon: An Affective Geometry of Warfare in the Mountains of Afghanistan." *Political Geography*. 64: 53-62.

Gras, Carla, y Valeria Hernández. 2013a. "Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos empresariales." In *El agro como negocio: Producción, sociedad, territorios en la globalización*, editado por Carla Gras and Valeria Hernández, 17-46. Buenos Aires: Biblos.

———. 2013b. "El modelo agribusiness y sus traducciones territoriales." In *El agro como negocio: Producción, sociedad, territorios en la globalización*, editado por Carla Gras and Valeria Hernández, 49-66. Buenos Aires: Biblos.

———. 2016. *Radiografía del nuevo campo argentino: Del terrateniente al empresario transnacional*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gras, Carla, and Andrea Varrotti. 2013. "El modelo de negocios de las principales mega empresas agropecuarias." In *El agro como negocio: Producción, sociedad, territorios en la globalización*, editado por Carla Gras y Valeria Hernández, 215-236. Buenos Aires: Biblos.

Goonewardena, K. (2018) Planetary urbanization and totality. *Environment and Planning D: Society and Space* 36(3): 456–473.

Gupta, Akhil. 1998. *Post-Colonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Durham: Duke University Press.

———. 2013. *Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India*. Durham: Duke University Press.

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14, 575-599.

Hardt, Michael, y Antonio Negri. 2000. *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.

———. 2001. "Adventures of the Multitude: Response of the Authors." *Rethinking Marxism* 13 (3/4): 236-243.

———. 2009. *Commonwealth*. Cambridge: Harvard University Press.

Harvey, David. 2012. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso.

Harvey, Penny, and Hannah Knox. 2015. *Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Hernández, Valeria. 2009. "La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en la pampa gringa." En *La Argentina rural: De la agricultura familiar a los agronegocios*, editado por Carla Gras y Valeria Hernández, 39-64. Buenos Aires: Biblos.

Hernández, Valeria, María F. Fossa Riglos, y María E. Muzi. 2013a. "Agrociudades pampeanas: usos del territorio". In *El agro como negocio: Producción, sociedad, y territorios en la globalización*, editado por Carla Gras and Valeria Hernández, 123-149. Buenos Aires: Biblos.

———. 2013b. "Figuras socioproductivas de la ruralidad globalizada." In *El agro como negocio: Producción, sociedad, y territorios en la globalización*, editado por Carla Gras and Valeria Hernández, 151-169. Buenos Aires: Biblos.

Hetherington, Kregg. 2014. "Waiting for the Surveyor: Development Promises and the Temporality of Infrastructure." *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 19(2): 195-211.

Hetherington, Kregg, and Jeremy Campbell. 2014. "Nature, Infrastructure, and the State: Rethinking Development in Latin America." *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 19(2): 191-194.

Huergo, H. (2006, septiembre 2). La hidrovía abona la inversión. *Clarín.*

Infocampo. (2016, junio 18). Inversión: grupo brasileño construirá una terminal portuaria en Rosario. http://www.infocampo.com.ar/inversion-grupo-brasileno-construira-una-terminal-portuaria-en-rosario/

Invisible Committee. 2009. *The Coming Insurrection*. Los Angeles: Semiotext(e).

Invisible Committee. 2015. *To Our Friends*. Translated by Robert Hurley. Los Angeles: Semiotext(e).

Kennedy, Christopher, John Cuddihy, and Joshua Engel-Yan. 2007. "The Changing Metabolism of Cities." *Journal of Industrial Ecology* 11(2): 43-59.

Kernaghan, Richard. 2012. "Furrows and Walls, or the Legal Topography of a Frontier Road in Peru." *Mobilities* 7(4): 501-520.

Klein, Naomi. 2014. *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. Toronto: Knopf.

Lapegna, Pablo. 2016a. "Genetically Modified Soybeans, Agrochemical Exposure, and Everyday Forms of Peasant Collaboration in Argentina." *The Journal of Peasant Studies* 43(2): 517-536.

———. 2016b. *Soybeans and Power: Genetically Modified Crops, Environmental Politics and Social Movements in Argentina*. Oxford: Oxford University Press.

Larkin, Brian. 2013. "The Politics and Poetics of Infrastructure." *Annual Review of Anthropology* 42(1): 327-343.

Leake, Andrés, Omar López, y María C. Leake. 2016. *La deforestación del Chaco salteño*. Salta: SMA Ediciones.

Lefebvre, Henri. 2003 (1970). *The Urban Revolution*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

———. 2004 (1992). *Rhythmanalysis*. New York: Continuum.

Leguizamón, Amalia. 2016. "Disappearing Nature? Agribusiness, Biotechnology, and Distance in Argentine Soybean Production." *The Journal of Peasant Studies* 43(2): 313-330.

Merrifield, A. (2013). *The politics of the encounter: Urban theory and protest under planetary urbanization*. University of Georgia Press.

Mitchell, Timothy. 2011. *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*. London: Verso.

Mier y Terán Giménez Cacho, Mateo. 2016. "Soybean Agrifood Systems Dynamics and the Diversity of Farming Styles on the Agricultural Frontier in Mato Grosso, Brazil." *The Journal of Peasant Studies* 43(2): 419-441.

Moore, Jason. 2015. *Capitalism and the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. London: Verso.

Morton, Timothy. 2013. *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Muehlmann, Shaylih. 2013. *When I Wear my Alligator Boots*. Berkeley: University of California Press.Mumford, Lewis. 1989 (1961). *The City in History*. New York: Harcourt.

Negri, Antonio. 2018. *From the Factory to the Metropolis*. Cambridge, England: Polity

Oliveira, Gustavo, and Mindi Schneider. 2016. "The Politics of Flexing Soybeans: China, Brazil, and Global Agroindustrial Restructuring." *The Journal of Peasant Studies* 43(1): 167-194.

Oliveira, Gustavo, and Susanna Hecht. 2016. "Sacred Groves, Sacrifice Zones and Soy Production: Globalization, Intensification and Neo-Natures in South America." *The Journal of Peasant Studies* 43(2): 251-285.

Ong, Aihwa. 1999. *Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality*. Durham: Duke University Press.

———. 2012. "Powers of Sovereignty: State, People, Wealth, Life." *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology* 64: 24-35.

Peake, Linda. 2016. "The Twenty-First Century Quest for Feminism and the Global Urban." *International Journal or Urban and Regional Research*. 40(1): 219-227.

Reyna, Stephen. 2002. "Empire: A Dazzling Performance According to a Simpleton." *Anthropological Theory* 2(4): 489-497.

Rockefeller, Stuart. 2011. "Flow." *Current Anthropology* 52(4): 557-578.

Roy, Ananya. 2009. "The 21st Century Metropolis: New Geographies of Theory." Regional Studies. 43(6):819-830.

Roy, Ananya and Aihwa Ong, eds. 2011. *Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global*. Oxford: Blackwell.

Robin, Marie-Monique. 2012. *The World According to Monsanto*. New York: The New Press.

Rulli, Jorge. 2009. *Pueblos fumigados: Los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras*. Buenos Aires: Agata.

Sassen, Saskia. 2001. *The Global City: New York, London, Tokyo*. Second edition. Princeton: Princeton University Press.

Simone, A. (2004). *For the city yet to come: Changing African life in four cities*. Duke University Press.

Tiqqun. 2010. *Introduction to Civil War*. Los Angeles: Semiotext(e).

———. 2011. *This is not a Program*. Los Angeles: Semiotext(e).

Toscano, Alberto. 2004. "Factory, Territory, Metropolis, Empire." *Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities* 9(2): 197-216.

———. 2011. "Logistics and Opposition." *Mute* 3(2): 1-13.

———. 2014. "Lineaments of the Logistical State." *Viewpoint Magazine* Issue 4.

Toscano, Alberto, and Jeff Kinkle. 2015. *Cartographies of the Absolute*. Winchester, UK: Zero Books.

Tsing, Anna. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press.

———. 2012. "Empire Salvage's Heart: Why Diversity Matters in the Global Political Economy." *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology* 64: 36-50.

———. 2015. *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton: Princeton University Press.

Vazquez, Menardo, Eduardo Maturano, Agustina Etchegoyen, Flavia Silvina Difilippo, Bryan Maclean. 2017. "Association Between Cancer and Environmental Exposure to Glyphosate." *International Journal of Clinical Medicine* 8: 73-85.

Vouros, Dimitri. 2014. "Hegel, 'Totality,' and 'Abstract Universalism' in the Philosophy of Theodor Adorno." *Parrhesia*. 21: 176-86.

Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press.

Wesz Jr, Valdemar João. 2016. "Strategies and Hybrid Dynamics of Soy Transnational Companies in the Southern Cone." *The Journal of Peasant Studies* 43(2): 286-312.

Williams, Raymond. 1993 (1973). *The Country and the City*. London: The Hogarth Press.

31. Tras la pista del ejote global: consideraciones metodológicas en la etnografía multisituada[1]

Susanne Elizabeth Freidberg

Resumen: La necesidad de desmitificar y concretar la globalización ha suscitado numerosos llamados para emprender un trabajo de campo multisituado. Este artículo discute cómo este tipo de trabajo de campo se utilizó para examinar la reestructuración contemporánea de las cadenas de comercialización de alimentos frescos entre África y Europa, en un momento donde existe una creciente preocupación en Europa por la calidad y la seguridad de los alimentos. Como orientación conceptual, se recurrió a la teoría de la convención y a la teoría del actor-red, se desarrolló un trabajo de campo cualitativo en los lugares de producción, importación y exportación en las cadenas de producción anglófonas (Zambia-Londres) y francófonas (Burkina Faso-París). En este trabajo también se analizan los retos que plantea la investigación multisituada, especialmente en ámbitos donde el secreto y el engaño son herramientas habituales de negociación.

El ejote francés africano se ha convertido en uno de los símbolos de la nueva economía alimentaria global, en la que regiones tropicales exportan productos frescos de alto valor a mercados situados a miles de kilómetros al norte, y en la que el comercio se rige cada vez menos por la distancia y la temporada, y más por las estrictas normas de calidad y seguridad de los mercados mundiales. Pero, con frecuencia, un ejote comprado en Francia no suele venir del mismo lugar de África que uno comprado en Inglaterra, ya que los vínculos coloniales aún continúan dominando este mercado. Es casi seguro que el ejote haya sido sometido a distintas formas y grados de transformación y regulación, a pesar de la unificación europea en curso. Es el objeto, en última instancia, de todo un conjunto de

1 Publicado originalmente en: Susanne Elizabeth Freidberg, 2001 "On the trail of the global green bean: methodological considerations in the multi-site ethnography", *Global Networks*, 1(4): 353-368.

diferentes relaciones sociales de producción y distribución. Y todo esto, incluso, antes de llegar a la cocina.

La magnitud de la diferencia entre lo que denominaré las cadenas de productos básicos del ejote "anglófono" y el "francófono" demuestra con especial eficacia un argumento ya establecido por Goodman y Watts en *Globalising food* (Goodman y Watts, 1997): que los procesos de liberalización económica, armonización normativa y la inversión transnacional no necesariamente borran (y de hecho pueden incrementar) las diferencias geográficas en las prácticas y redes de aprovisionamiento de alimentos (Goodman, 1997). No obstante, este análisis, que reconoce la diferencia y la contingencia, plantea un reto metodológico: ¿cuál es la mejor forma de identificar las fuentes de variación y cambio dentro de las cadenas transnacionales de productos básicos alimentarios? Esta pregunta es relevante no solo para los campos de la geografía económica y los estudios agroalimentarios, sino también para el corpus más amplio de investigación sobre la "vida social" de las mercancías transnacionales (Appadurai, 1986).

Ciertamente, es útil empezar por identificar los lugares de poder y control. Gereffi subraya que distintos agentes clave dominan diferentes cadenas, dependiendo de los procesos de producción y de los mercados implicados. Las industrias con grandes barreras de entrada al mercado, como los automóviles y las computadoras, se caracterizan por estar "impulsadas por los productores", mientras que los textiles, el calzado y la mayoría de las cadenas de productos agrícolas, si no es que todos, están "impulsadas por los compradores", porque en gran medida están controlados por las empresas que controlan el mercadeo, las marcas y el diseño (Gereffi y Korzeniewicz, 1994; Raikes *et al*., 2000). En el caso de los productos frescos, esto supone los principales minoristas de alimentos (Barrett *et al*., 1999; Marsden, 1997).

Pocos cuestionarían que los minoristas han llegado a desempeñar un papel muy poderoso en el sistema agroalimentario. Pero su control sobre la oferta y la comercialización no lo explica todo, dado que, en ciertos aspectos cruciales, la comida no es como otras mercancías. Retomando el ejemplo del ejote africano francés: las diferencias entre los actuales

minoristas franceses y británicos son significativas, pero por sí mismas no explican por qué las cadenas de productos básicos francófonas y anglófonas difieren en todo su transcurso desde la granja (donde predomina la producción campesina africana en la primera, y las plantaciones a gran escala en la segunda) hasta el mercado (donde los franceses prefieren los ejotes a granel y los británicos los preenvasados, recortados y listos para el microondas). Asimismo, importante para comprender la situación son las historias agrarias específicas de ciertas regiones de África y las historias francesas y británicas en torno al colonialismo, el comercio y la innovación culinaria. Ante todo, el comercio afroeuropeo de ejotes y otros alimentos frescos debe entenderse como un conjunto de actividades humanas y procesos biofísicos interrelacionados, todos ellos impredecibles, desde plagas y vendavales hasta vuelos cancelados y saturación de mercados. Por tanto, el comercio depende en gran medida de las relaciones de confianza, la comunicación frecuente y una serie de mecanismos de gestión de riesgos, en conjunto, que no se comprenden con facilidad mediante un estudio convencional sobre un solo lugar o sector.

Este artículo muestra cómo la etnografía comparativa y multisituada puede ayudar a entender las dinámicas, geográficamente dispersas, y las relaciones sociales que constituyen las cadenas transnacionales de alimentos. La necesidad de desmitificar y concretar la globalización ha suscitado numerosas llamadas para impulsar la investigación multisituada (Burawoy *et al*., 2000; Marcus, 1998; Miller, 1997; Mitchell, 1997). Este artículo documenta el desarrollo de un proyecto de este tipo, con todas sus ventajas e inconvenientes.

El proyecto en cuestión pretendía contribuir al conjunto de estudios sobre la relación entre las preocupaciones contemporáneas por la seguridad y la calidad de los alimentos en el mundo industrializado y la reestructuración en curso de ciertas cadenas transnacionales de alimentos. Más en concreto, pretendía demostrar un aspecto que estas investigaciones, aún en gran parte anglocéntricas, pasaban por alto: en resumen, que no es homogénea la restructuración que se está produciendo, incluso dentro de un sector pequeño y específico del comercio mundial de alimentos (como el comercio afroeuropeo de hortalizas frescas). Al contrario, es

geográficamente variada y está moldeada por las "culturas del comercio" de grupos determinados, así como por la historia de la producción y la distribución de alimentos propias del lugar.

En la siguiente sección se describen las investigaciones realizadas en 1993-1994 y 1999-2000 en Burkina Faso, Zambia, Londres y París.[2] En lo que resta del artículo, se discuten, primero, los conceptos analíticos en los que se enmarca el proyecto y, a continuación, los retos y dilemas a los que se encontraron en el propio trabajo de campo. No quiero restar importancia a los obstáculos de la investigación dentro de las industrias donde investigadores de cualquier tipo se consideran sospechosos y donde el engaño y el secretismo son herramientas habituales de trabajo. Sin embargo, sugiero que estos obstáculos se vuelven más ilustrativos, aunque no menos formidables, en el contexto de un estudio comparativo, pues muestran cómo el funcionamiento de las distintas cadenas de mercancías está determinado por presiones económicas, limitaciones políticas y normas culturales específicas.

Los campos

El estudio comparativo de los ejotes transnacionales comenzó a partir de una investigación de campo para el doctorado de 1993 a 1994 sobre la historia social de la horticultura comercial en el suroeste de Burkina Faso. Por medio de la observación participante y de las entrevistas en aldeas y mercados de horticultura, me familiaricé con las actividades cotidianas y los retos de la producción y la comercialización de hortalizas en Burkina Faso (Freidberg, 2001). Además, registré en las biografías profesionales de una serie de empresarios locales que, tras la reciente liberalización del comercio, comenzaban a exportar ejotes a Europa (Freidberg, 1997). Este enfoque biográfico se inspiró en el ejemplo de Gregoire y Labazée, entre otros, cuyos trabajos sobre el empresariado africano utilizan biografías para comprender cómo los empresarios construyen sus carreras individuales a partir de una combinación de recursos heredados y adquiridos (Gregoire y Labazée, 1993; Labazée, 1988; Labazée, 1994). En mi caso, las entrevistas

2 Esta investigación recibió apoyo del National Science Foundation, el Fulbright IIE Program, el African Studies Rocca Family Fellowship y el Dartmouth College Rockefeller Center.

a los empresarios también proporcionaron información sobre la logística de la agroexportación, así como sobre el mercado francés.

A mediados de la década de los noventa, justo cuando cada vez más países africanos comenzaban a acatar las recomendaciones del Banco Mundial y otros donantes para que produjeran alimentos "no tradicionales" de alto valor para la exportación, como los ejotes (Jaffee, 1995), el futuro de estas iniciativas de exportación fue cuestionado por tres acontecimientos distintos. En primer lugar, la Ronda Uruguaya de negociaciones comerciales del GATT exigió el fin de los acuerdos comerciales preferenciales de Europa con sus antiguas colonias, lo que llevó a los exportadores de productos agrícolas tropicales y fuera de estación, como Burkina Faso, a entrar en competencia con sitios como Brasil y Florida. En segundo lugar, dos brotes del mortífero virus del ébola en África Central y Occidental, combinados con la publicación de una serie de influyentes (aunque quizá alarmistas) libros y artículos sobre los patógenos "emergentes" de los trópicos, acentuaron las percepciones populares en occidente sobre África como una "zona caliente" plagada de enfermedades (Garrett, 1994; Kaplan, 1994; Preston, 1994). En tercer lugar, la crisis de las "vacas locas", junto con evidencias que vinculan el incremento de enfermedades transmitidas por alimentos en el mundo, en parte, aunque no exclusivamente, debido al crecimiento del comercio, contribuyó a transformar las importaciones de alimentos en un potencial problema político en Europa.

Aunque la Unión Europea se ha visto dividida por crisis alimentarias internas (como la enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaña y, más tarde, la de pollos contaminados con dioxinas en Bélgica), en general se ha mantenido unida frente a amenazas externas. Así, en los últimos años no solo se ha prohibido en la ue la carne de vacas estadounidenses alimentadas con hormonas, sino que también el pescado, la carne y los productos procedentes de regiones en África, donde brotes de enfermedades o la falta de documentación adecuada levantan sospechas (aunque típicamente sin pruebas) de contaminación.

Durante el mismo periodo, investigadores del Reino Unido descubrieron que los supermercados británicos que se surtían de verduras frescas de

Kenia (una antigua colonia británica) empezaron a depender menos de cooperativas de pequeños agricultores y más en las grandes plantaciones, que pueden demostrar con mayor facilidad que cumplen con los estrictos estándares de los supermercados en cuanto a las condiciones laborales, el ambiente y, sobre todo, la sanidad y el uso de productos químicos (Dolan *et al*., 1999). Pero ¿podría este cambio caracterizar la tendencia de todo el continente? A finales de la década de los noventa, parecía poco probable que esto sucediera en las antiguas colonias francesas y solo en parte de ellas, porque las grandes plantaciones, si bien no eran desconocidas en las regiones exportadoras de frutas tropicales de Costa de Marfil y de la parte francófona de África Central, son escasas y, por lo general, poco exitosas en regiones aptas para el cultivo de verduras como el ejote (Mackintosh, 1989). Además, el cambio sucedido en Kenia señalaba una intervención cada vez más directa y autoritaria de los supermercados británicos en aspectos de su aprovisionamiento en el extranjero que los minoristas franceses prefieren ignorar, por varias razones. Por último, la vasta bibliografía sobre la historia de la comida, las formas y los modales*[3] en Francia y Gran Bretaña indica que, más allá de los estereotipos, los británicos y los franceses tienen ideas muy distintas sobre lo que "es bueno para comer" (Harris, 1986). Dado que las normas alimentarias y culinarias tienen mucha influencia en las pautas de importación de alimentos de un país (por ejemplo, Gran Bretaña importa de África cantidades mucho mayores de vegetales "asiáticos", como elotes cambray, que Francia o cualquier otro país europeo (Graef, 1995), deben formar parte integral de todo análisis sobre las cadenas trasnacionales y contemporáneas de comercialización de alimentos. En todo caso, este era mi razonamiento, cuando me propuse comparar el comercio anglófono y francófono de vegetales frescos entre África y Europa.

La primera etapa del trabajo de campo de este estudio tuvo lugar en el Marché International de Rungis, que se describe a sí mismo como el mayor mercado mayorista de productos agrícolas del mundo y es el destino de la

3 Por ejemplo, Burnett (1997), Mennell (1985) y Teuteberg (1992).
*N. de T.: La fecha de la cita de Burnett (1997) no coincide con la consignada en la referencia final. Es un error de origen.

mayor parte de los ejotes del África francófona (casi todos los demás van a Marsella). Ubicado cerca del aeropuerto de Orly, en las afueras de París, Rungis es un amplio espacio de concreto con almacenes, muelles de carga y estacionamientos para camiones, intercalados con varios bares y panaderías. La mayor parte de las entregas y salidas de productos agrícolas suceden a primera hora de la mañana, pero los mayoristas y, sobre todo, los importadores hacen gran parte de sus negocios a última hora del día y por teléfono. A partir de la información y los contactos recabados en mi anterior trabajo de campo en Burkina Faso, entrevisté a casi todos los importadores que trabajaban en África y que estaban dispuestos a hablar conmigo (dieciocho en total), además de una serie de mayoristas, transportistas y representantes de la asociación de comercio de productos frescos. Aunque estas entrevistas en oficinas apenas se parecían a la observación participante convencional, en las llamadas telefónicas de larga distancia que con frecuencia interrumpían las conversaciones encontré ejemplos para comprender mejor cómo los importadores realizaban transacciones y gestionaban las crisis cotidianas. Además, sostuve muchas conversaciones informales con comerciantes (en su mayor parte hombres) tanto en las áreas de venta al mayoreo como en uno de los bares que frecuentaban.

A los seis meses, volví a Burkina Faso durante la "temporada alta" de ejotes (enero-marzo). Tras reunirme con el presidente de la asociación de exportadores de productos frescos, todos los miembros activos de la asociación (diez hombres y una mujer) se mostraron dispuestos a hablar conmigo. En estas entrevistas me contaron sobre sus historias profesionales, su trabajo como exportadores y cómo este había cambiado en los últimos años. Cómo volveré a comentar más adelante, su franqueza inicial no necesariamente indicaba la intención de revelar mucho. También me entrevisté con miembros y presidentes de cooperativas de productores, hablé con representantes de agencias que ofrecen asistencia al sector de exportación hortícola y visité a varios informantes de mi investigación anterior. Por último, visité con frecuencia la principal empacadora del aeropuerto de Ouagadougou, donde varios centenares de trabajadores (la mayoría mujeres jóvenes) clasifican y empaquetan los ejotes para ser enviados en los vuelos nocturnos. Gracias a la amable encargada burkinesa,

pude pasar todo el tiempo que fue necesario en el piso de empaquetado, hablando con las trabajadoras y aprendiendo, con las manos en la masa, cómo clasifican los ejotes buenos de los inadecuados. Este fue un acceso fortuito y, como tal, la oportunidad no se repitió. En la cadena anglófona, esta aparente despreocupación por la sanidad y las relaciones públicas se habría considerado peligrosa y poco profesional.

Para el estudio de caso en el África anglófona, inicialmente elegí trabajar en Zimbabue, que tiene (o tenía) una de las industrias hortícolas más dinámicas del continente. Pero la violencia política y el despojo de tierras, a mediados de 2000, hicieron que las visitas a las plantaciones en Zimbabue fueran menos factibles, si no es que imposibles, así que decidí trabajar en Zambia. En cierto modo, esto resultó ser un mejor caso de estudio para comparar con Burkina Faso: ambos países tienen casi la misma población y el mismo ingreso per cápita (10 millones de habitantes y $320 dolares, respectivamente); ambos son países sin litoral, postsocialistas y se encuentran en un momento ambiguo de transición hacia la democracia. Sin embargo, no considero que ninguno de los dos países sea el típico exportador de hortalizas de regiones francófonas o anglófonas. La estructura y la organización social del sector exportador de Burkina Faso, por ejemplo, reflejan condiciones geográficas e históricas muy distintas de las que han configurado el cambio agrario en Senegal y Marruecos, mientras que Zambia, rica en minerales, se distingue de Kenia y Zimbabue por el abandono histórico de la agricultura de exportación. Las etiquetas de francófono y anglófono, en ese sentido, señalan la importancia de las experiencias coloniales particulares —y los vínculos poscoloniales duraderos con la metrópoli— más que describan un modelo exportador o de relación comercial.

Las diferencias más importantes entre Burkina Faso y Zambia se encuentran en su agroecología (Burkina Faso tiene menos agua y un periodo de crecimiento más corto) y en los propios sectores hortícolas de exportación. Mientras que en Burkina Faso la exportación reside en manos de pequeñas empresas (en algunos casos de un único propietario), la exportación en Zambia está controlada en su totalidad por dos grandes empresas, que exportan una gama relativamente amplia de verduras, en su mayoría preenvasadas (entre ellas guisantes, elotes cambray, calabacín, pimientos

y, por supuesto, ejotes), además de rosas.[4] Estas empresas (como la mayoría en Zimbabue) están financiadas por capital extranjero y dirigidas por personas (hombres) de ascendencia europea; todos los exportadores de Burkina Faso son burkineses que obtienen financiamiento mediante una combinación de créditos informales, préstamos bancarios y un uso creativo del dinero que proviene de fondos de ayuda del exterior. Casi todos los agricultores de Burkina Faso (predominantemente varones, aunque no en su totalidad), cultivan menos de una hectárea, combinando la mano de obra doméstica y contratada. En Zambia, al contrario, la producción tiene lugar en plantaciones de treinta mil hectáreas, propiedad de las propias empresas exportadoras o de agricultores comerciales (también de ascendencia europea) y trabajadas a destajo. Por último, el volumen de las exportaciones de verduras de Burkina Faso ha disminuido en los últimos años, mientras que en Zambia se ha disparado; existe un amplio consenso acerca de que el sector en Burkina Faso se encuentra en crisis —y corre el riesgo de perder totalmente su posición en el mercado europeo— mientras que la horticultura de exportación es la actividad más dinámica de la economía en Zambia.

La investigación de campo en Zambia involucró entrevistas con los directivos y los mandos medios de ambas empresas, así como con varios subcontratistas. También sostuve pláticas informales con algunos empleados de nivel inferior en estas empresas, la mayor parte zambianos negros, así como con algunos de los muchos consultores y empleados de organizaciones no gubernamentales (ong) que promueven el sector hortícola del país, que en ese momento era por mucho el de mayor crecimiento en la economía. Como explicaré en la última sección, la investigación de campo en Zambia planteó una serie de problemas totalmente distintos a los de Burkina Faso, no tanto porque el tamaño de muestra fuera mucho menor (dos empresas), sino porque los directivos de las empresas estaban mucho más preocupados por la publicidad negativa y, por tanto, desconfiaban más de cualquier persona que se pareciera remotamente a un periodista. A mi juicio, esto es

4 También hay varios cultivadores más pequeños de rosas, que operan en aproximadamente dos hectáreas por cabeza, pero muchos de ellos han quebrado en tiempos recientes.

un reflejo de la mayor propensión de la prensa británica por las historias de "nombrar y exponer", sobre todo en la industria alimenticia.

Por último, cuando aún estaba en Zambia, concreté entrevistas con los dos principales "agentes" de las dos empresas exportadoras en Londres, cuyas compañías suministran productos frescos a los principales supermercados del Reino Unido. Aunque estos agentes desempeñan formalmente el mismo rol de intermediarios que los importadores franceses, en realidad están mucho más sometidos a las exigencias de los supermercados. Pero, al mismo tiempo, también están muy bien informados para hablar sobre las dinámicas de poder y las tendencias recientes del comercio de productos frescos. Tuve la suerte de que las dos personas que conocí accedieran a conversar. También discutieron conmigo sobre la situación de Zambia en comparación con otras fuentes de suministro, como Kenia y Zimbabwe.

En viajes posteriores a Londres y París (enero y julio de 2001) mantuve contacto con varios importadores y realicé entrevistas con los gerentes de productos agrícolas de dos supermercados británicos que compran vegetales de Zambia. La investigación sobre la cadena anglófona se ha beneficiado de conversaciones con algunos de los varios investigadores británicos que ya han realizado estudios y publicado trabajos sobre este sector.[5] Este tipo de consultas y formas de colaboración informal enriquecen casi cualquier tipo de investigación, pero son en particular valiosas en proyectos de campo multisituados donde los ámbitos no son solo geográficos, sino que también cambian con rapidez. En otras palabras, el conocimiento compartido ayuda a compensar algunas de las dificultades logísticas de la investigación en la economía globalizada.

Las herramientas

El análisis desde la economía política enmarca muchas de las primeras investigaciones sobre la globalización de los alimentos. Esta literatura (que ha sido revisada y criticada en detalle en otros textos (Busch y Juska, 1997; Goodman, 1997; Goodman y Watts, 1997) interpretaba los alimentos como

5 Estos incluyen los equipos en el Institute of Development Studies (Dolan *et al*., 1999) y en el Natural Resources Institute (Chan y King, 2000).

una mercancía al igual que cualquier otra, y observaba fuertes paralelismos en la trayectoria histórica de la industria y la agricultura, dado que ambas eran moldeadas por la velocidad y la complejidad crecientes de los flujos de capital corporativo y por la erosión del poder del Estado nación (Bonanno, 1995). Desde entonces, estos paralelismos han sido cuestionados, y se argumenta que la macroeconomía política pasa por alto no solo los rasgos distintivos de una región, sino también el papel de dos grupos de agentes clave que impulsan el cambio y "construyen valor"'en el sistema alimentario mundial (Marsden, 1997): en primer lugar, el consumidor y los agentes que abastecen y regulan los alimentos de los consumidores y, en segundo, las distintas naturalezas biofísicas que actúan, directa o indirectamente, sobre los alimentos. Una de las ventajas del análisis de la cadena de suministros es que, al menos en teoría, considera tanto el "consumo" como la "naturaleza", de una u otra forma. En realidad, la pregunta central es *qué* técnicas —con qué métodos de trabajo de campo y de análisis— captan de forma más efectiva y coherente la complejidad y el dinamismo histórico de las relaciones entre los distintos eslabones de una cadena de mercancías. La etnografía multisituada es una opción, siempre y cuando el objeto de la investigación esté bien definido (Marcus, 1998). En esta sección se abordan las ideas en las que se basaron el diseño y la ejecución de este proyecto.

El consumo, la calidad y las convenciones

Dentro de los estudios agroalimentarios, tanto los esfuerzos teóricos como los empíricos por "reconocer" al consumidor han tenido que considerar la cuestión de cuánto poder tienen en realidad los consumidores sobre el suministro de alimentos (Fine y Leopold, 1993; Miller, 1995; Warde, 1997). La contracultura de las décadas de los sesenta y setenta sin duda contribuyó a que los alimentos "naturales" y "étnicos" adquirieran relevancia (Belasco, 1990; Goodman y Redclift, 1991) y las protestas ampliamente mediatizadas contra los alimentos transgénicos y la "mcdonaldización" (Bové *et al*., 2001) han impulsado a los agricultores de Europa y América del Norte a transitar hacia la producción ecológica y artesanal. Pero

Marsden, Flynn y Harrison afirman que, en general, los movimientos de consumidores han tenido relativamente poca repercusión en la política alimentaria del Reino Unido, donde la desastrosa gestión del Gobierno de la encefalopatía espongiforme bovina y otros riesgos alimentarios ha motivado a los consumidores a movilizarse en la mayoría de los países industrializados. Afirman, al contrario, que las principales cadenas de supermercados utilizan su poder sobre los proveedores para convertirse en los guardianes más confiables y eficaces del abastecimiento nacional de alimentos. Al defender el interés de los consumidores, también han logrado moldearlo (Marsden *et al*., 2000). Pero este no es necesariamente el caso en todas partes. Aunque las grandes cadenas de supermercados también dominan en la actualidad la venta minorista de alimentos en buena parte del oeste de Europa continental, no está claro que influyan de manera tan decidida en las preocupaciones de los consumidores como sucede en el Reino Unido. Obviamente, no han usurpado el papel de "expertos" del que los carniceros, panaderos y verduleros especializados gozan en Francia (Ducrocq, 1999; Larmet, 1999). En relación con este proyecto, lo que sí es evidente es que los consumidores no tienen un control *directo* sobre la importación de alimentos por medio de sus fronteras nacionales. Por tanto, aunque los datos de las investigaciones basadas en los consumidores pueden aportar información contextual útil (y que he utilizado cuando ha estado disponible).[6] La investigación etnográfica debería centrarse en las personas que ejercen el control y en los métodos que utilizan para garantizar que su oferta satisfaga la demanda de los consumidores.

A este respecto, la teoría francesa de la convención ofrece algunas orientaciones útiles. En países como Francia, donde el excedente de alimentos ha sido durante mucho tiempo un problema mayor que la escasez, la teoría de la convención explora, entre otras cosas, cómo la "calidad" permite a las granjas y empresas sobrevivir en un mercado competitivo y exigente.

6 Para Francia, he consultado encuestas al consumidor realizadas cada año por el Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, así como encuestas y estudios de grupos de enfoque realizados como parte del proyecto del Gobierno en Les Etats Généraux de l'Alimentation, http://www.agriculture.gouv.fr/ega/index.htm. Para el Reino Unido, me he referido a la encuesta del Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Annual National Food Survey, así como a investigaciones secundarias producidas como parte del The Nation's Diet Research Programme (Murcott, 1998).

El término *calidad* se ha definido de muy distintas maneras en la literatura agroalimentaria contemporánea (Murdoch *et al*., 1999). Bertil Sylvander lo utiliza para distinguir entre *normas* alimentarias tradicionales como el tamaño o el peso, que son inmediatamente evidentes, y *cualidades*, como la pureza, la frescura y el sabor, que pueden depender de procesos concretos de producción, pero que no siempre son inmediatamente evidentes o reconocidas de manera universal. De acuerdo con esta definición, la calidad es un constructo —que los consumidores supuestamente aceptan y valoran— y su comercialización depende de formas externas de garantía o "convenciones". Entre ellos se encuentran esquemas "institucionales" que garantizan la calidad (certificación, etiquetado, y sistemas de "trazabilidad", que indican cómo se producen los bienes) y "transaccionales" (es decir, las normas y prácticas por medio de las cuales el comprador llega a confiar en el vendedor), Sylvander (1995).

Uno de los principales objetivos de este proyecto era investigar cómo distintos tipos de convenciones conforman las relaciones y el trabajo cotidiano de los agricultores, exportadores e importadores. En el comercio transnacional del ejote existe el control de calidad institucional y transaccional, pero operan de manera bastante distinta en las cadenas de suministro inglesas y francesas. En la primera, una gran cantidad de trámites y un grupo de supervisores y contadores garantizan que cada ejote se monitoree desde la semilla y hasta el estante del supermercado. Además, casi todos los productos agrícolas son cosechados y empacados en Zambia, en cajas de plástico aptas para el microondas y con etiquetas del supermercado. En el Reino Unido, las marcas propias de los minoristas se han convertido en un elemento institucional importante en comparación con otros lugares, pues prometen al consumidor cierta calidad y valor (aunque las verduras cambray transportadas vía aérea no son nada baratas, cuestan entre 12-15 libras el kilo).

Aun cuando tanto los exportadores de Zambia como los importadores británicos subrayaron la importancia de conocerse y confiar el uno en el otro, toda la relación depende de la anuencia de ambas partes con las expectativas del supermercado, como demuestran su contabilidad y las auditorías *in situ*. Lo mismo puede decirse de la relación entre el

importador y el comprador del supermercado, que uno de los importadores entrevistados describió "más allá de la personalidad […] es una relación totalmente profesional".

En la cadena francófona, por el contrario, todos los ejotes se envían a granel en cajas de 2.5 o 5 kilos, en parte debido a que el mercado francés de ejotes empacados es muy pequeño (y se abastece así exclusivamente de Kenia). Según la legislación de la UE,[7] todas las cajas deben etiquetarse por grado, calibre y nación de origen, pero los importadores franceses confían más en el carácter y los resultados de sus proveedores africanos que en las etiquetas de las cajas u otras garantías de calidad escritas. Al final, es muy fácil esconder ejotes de baja calidad en el fondo de una caja etiquetada como de "calidad premium" y, de hecho, ciertos exportadores son conocidos por ese tipo de engaños. Con sus compradores, los importadores franceses tradicionalmente también han dependido de sus contactos personales frecuentes para vender sus productos agrícolas. Lamentan el anonimato y la intrascendencia de las relaciones con la mayoría de los compradores de supermercados franceses que, al igual que sus homólogos británicos, exigen a los importadores cada vez con mayor frecuencia una serie de normas rígidas (*cahiers des charges).* Un importador menciona lo siguiente sobre esta situación:

> Tomemos, por ejemplo, los tomates de la categoría 1.57-67. En teoría, si se tratara de un producto industrial, todos serían idénticos. Pero cuando se trata de frutas y verduras, estos productos pueden ser totalmente diferentes en apariencia y gusto. Así que no puedes explicar por teléfono a un comprador potencial que el producto es así o asado, él partirá de una norma que no significa nada en absoluto. Entonces, es un poco frustrante no poder defender tu producto.

El análisis comparativo de los usos y percepciones de las convenciones institucionales y comerciales revela, en primer lugar, diferentes distribuciones de la riqueza y el poder. En Zambia, el capital de las empresas y la ayuda de la Commonwealth han permitido al sector exportador satisfacer

7 Las normas aplicables al ejote están publicadas en el *Official Journal of the European Economic Community*, *7*(julio de 1962), núms. 58/62.

las demandas de los minoristas sobre la trazabilidad y las instalaciones de prempacado; en Burkina Faso, el financiamiento es mucho más escaso y disperso. En la cadena anglófona, el monopolio del mercado alimentario nacional que prácticamente conforman los cinco principales supermercados británicos les otorga un gran control no solo de los precios, el empacado y la distribución, sino también de las prácticas comerciales habituales de sus proveedores. En este último ámbito, al menos, los importadores franceses tienen un margen más amplio para decidir con quién hacen negocios y de qué manera.

En segundo lugar, el análisis comparativo permite aclarar el significado real de las diferentes instancias regulatorias nacionales e internacionales, así como los efectos del cambio normativo. Por ejemplo, la Unión Europea (ue) ha armonizado la legislación sobre residuos de pesticidas, promoviendo la probable prohibición de muchos productos químicos que los productores africanos de hortalizas utilizan en la actualidad (Chan y King, 2000). No obstante, los importadores europeos de productos agrícolas saben que las inspecciones en algunos puertos de entrada en el continente son más laxas que otros, y los envíos de mercancía sospechosa pueden ser desviados en función de ello. Por su parte, el Comité de Residuos de Plaguicidas del Gobierno británico "nombra y exhibe" cada año a todos los minoristas que son sorprendidos vendiendo alimentos contaminados con residuos. Los importadores y representantes de los supermercados británicos mencionan esta práctica como una de sus mayores causas de ansiedad.

Pero la estructura y la regulación de los mercados no pueden por sí solas explicar cómo se constituyen y mantienen en realidad las relaciones comerciales en ciertas cadenas de suministro. En la cadena anglófona, el hecho de que todos los exportadores e importadores sean no solo hablantes de inglés, sino también blancos y varones, da lugar a relaciones muy diferentes, con un mayor grado de flexibilidad, empatía e incluso solidaridad, que las relaciones entre los exportadores burkineses e importadores franceses, que tienden a ser más complicadas dadas las respectivas caracterizaciones sobre "los franceses" (o el "hombre blanco") y "los africanos". En otras palabras, la confianza, como base de las convenciones "comerciales", puede ser más difícil de establecerse en intercambios donde los participantes

están separados no solo por la distancia, sino por los estereotipos raciales o culturales y por la memoria de la dominación colonial. Las dificultades pueden no discutirse de forma abierta, pero se revelan en comentarios casuales, en conversaciones escuchadas entre socios comerciales y, sobre todo, en el análisis comparativo de cadenas de suministro derivadas de distintas historias coloniales. De hecho, uno de los argumentos de peso para emplear la etnografía multisituada en el estudio de las cadenas transnacionales de suministro es la visión que pueden ofrecer sobre los fundamentos sociales e históricos de las relaciones de confianza. Por último, y volviendo al papel del consumidor, el análisis comparativo de las convenciones muestra cómo la conducta cotidiana del comercio se organiza en torno a diferentes supuestos sobre las cualidades que los consumidores demandan y cuál es la mejor manera de satisfacer esos deseos.

La naturaleza y las redes

La cuestión acerca de qué es lo singular en la *naturaleza* de los alimentos no es nueva. Gran parte de los primeros trabajos sobre la economía política de la agricultura discutía los obstáculos naturales para una completa industrialización de la producción alimentaria (Goodman *et al*., 1987; Mann y Dickinson, 1978), mientras que los sociólogos y antropólogos del consumo han escrito ampliamente sobre la relación entre la naturaleza íntima, material y, en cierto modo, peligrosa, del consumo de alimentos y la enorme variedad de tabús alimentarios, ansiedades y rituales de preparación y de consumo (Douglas, 1984; Fischler, 1993; Mennell *et al*., 1992).

La investigación contemporánea que analiza la influencia de la naturaleza en la *distribución* de alimentos es relativamente escasa, aunque es claramente fundamental para comprender lo que significa en realidad la "globalización" de los alimentos. Hasta ahora, el carácter "orgánico" de los alimentos (Fine, 1994) ha impuesto ciertas restricciones a las formas de producción "en cadena" globalizadas en verdad como las que se observan en las industrias automotriz y del calzado deportivo (Dickens, 1998). En cambio, en las tres últimas décadas hemos atestiguado el aumento del volumen y la diversidad de los intercambios transfronterizos y transoceánicos de alimentos —en

especial de frutas y verduras frescas— y, en términos más generales, de la ampliación y reconfiguración de las "redes agroalimentarias" implicadas no solo en el comercio, sino también en la investigación, la inversión y la promoción (Lockie, 2000).

Tres análisis recientes sobre este tipo de redes revelan que incluyen una amplia gama de instituciones, así como de "actantes" no humanos que van desde las plantas a las máquinas, pasando por "híbridos" naturaleza-cultura. En el sector canadiense de la colza, "la ampliación y modificación de las relaciones entre instituciones, personas, cosas y símbolos" condujo a la creación de nuevas variedades de colza, aptas para el consumo humano (Busch y Juska, 1997). En la industria estadounidense del maíz, el desarrollo del maíz híbrido depende de un "colectivo" en expansión, cuyos miembros incluyen (entre otros) linajes de semillas de patente, bancos de genes, instancias de concesión de tierras, agricultores e incluso el metabolismo de humanos y del ganado (Fitzsimmons y Goodman, 1998). En el mundo corporativo del café, dominado por el capital, una red de activistas, cooperativas de productores, banqueros y máquinas de fax sostienen la alternativa para el "comercio justo" del café (Whatmore y Thorne, 1997).

Todos estos ejemplos muestran cómo el análisis de actor-redes puede sacar a la naturaleza del trasfondo e incorporar a los procesos constitutivos y a las relaciones de las cadenas transnacionales de alimentos. Sin embargo, ninguno apunta que la naturaleza como actor puede ser peligrosamente dinámica y sensible cuando las mercancías son ejotes frescos o algo similar, producidos en algún lugar como el Sahel. Un milímetro más de grosor, una mancha, una arruga o un pliegue arruinan el valor comercial de un ejote "fino" o "extrafino", mientras que una plaga o un vendaval (la temporada de cultivo de Burkina Faso coincide con la temporada del Harmattan, el viento seco y polvoriento del Sahara) pueden arruinar toda una cosecha. No obstante, el "desastre natural" más común en el negocio del ejote en Burkina es la deshidratación y el deterioro producidos por una combinación de fallos humanos y mecánicos que detiene a los frágiles ejotes en algún sitio durante su camino al mercado, como la pista de un aeropuerto. Las verduras frescas de Zambia son vulnerables a peligros similares, pero instalaciones de frío muy superiores, vehículos mejor

mantenidos y una zona de producción mucho más centralizada contribuyen a que los productos agrícolas se envíen con su "frescura" (cualidad clave) intacta. En los puertos de entrada de Europa, la estrecha coordinación entre la actividad humana y la tecnología continúa siendo fundamental para mantener la frescura y, por tanto, el valor de mercado. Los vuelos procedentes del África subsahariana se programan para arribar antes del amanecer, de manera que los productos se vendan esa misma mañana en los muelles mayoristas o de camino a los supermercados.

En resumen, los esfuerzos por estimular, podar, preservar o correr contra el reloj de la naturaleza biofísica son fundamentales en las actividades y relaciones cotidianas del comercio transnacional del ejote. Aunque podría decirse que esto es cierto para el comercio de todos los perecederos, dedicar un tiempo a observar lo que sucede en puntos a lo largo de la cadena de productos básicos —los campos, los camiones, los aeropuertos, los almacenes, las oficinas— es una de las formas más directas de apreciar el papel de los "actantes" no humanos, simplemente porque durante ese tiempo uno está también sometido al menos a algunos de sus impactos, como el calor del mediodía, los pinchazos de llanta y los cortes de electricidad. La etnografía comparativa multisituada también permite determinar qué procesos y agentes naturales son específicos de un lugar o producto, cuáles están presentes de manera ocasional o constante, cuáles preocupan más a los participantes humanos de cierto comercio, etc. Además, este tipo de trabajo de campo revela cómo las interacciones humano-naturaleza en distintos lugares configuran las relaciones humanas *entre* estos mismos sitios. Por ejemplo, la dificultad de los exportadores burkineses para mantener frescos los productos agrícolas entre su cosecha y el transporte aéreo es una fuente importante de tensión en sus relaciones con los importadores franceses que, cuando reciben ejotes marchitos, no pueden hacer mucho para ocultar el daño ante los ojos de sus propios clientes.

Los retos

En proyectos de trabajo de campo multisituado, un marco analítico claro permite esclarecer los objetivos en cada sitio de estudio y, por tanto, ayuda a evitar dudas sobre la profundidad de comprensión que pueden alcanzar

proyectos de este tipo. Esta, por supuesto, era tradicionalmente la mayor sospecha que la antropología tenía sobre las metodologías de campo de las ciencias sociales que no pretendían la inmersión en una sociedad concreta o el conocimiento exhaustivo de ella (Marcus, 1998). Aunque ya pocos cuestionarían la legitimidad y el valor de la etnografía multisituada, continúan existiendo las dificultades para *llevarla a cabo*.

Algunos son problemas logísticos ya conocidos en la etnografía convencional que se ocupa de un único lugar, solo que multiplicados. Estos presentan obstáculos más o menos complejos dependiendo del alcance del proyecto y del tiempo, el dinero y de otros recursos disponibles. Por ejemplo, hubiera sido ideal que yo hablara con fluidez todos los idiomas que pudiera haber encontrado en cada sitio. En la práctica, esto era imposible; aunque hablaba inglés, francés y algo de dioula (uno de los idiomas del sur de Burkina Faso), no tuve tiempo de aprender el mooré (hablado en otras partes de Burkina Faso) ni ninguna de las lenguas africanas que se hablan en Lukasa, la capital de Zambia (sobre todo porque decidí ir a Zambia, en vez de a Zimbabue, tan solo dos meses antes). Resulta que los sitios y las situaciones sociales que más me interesaba entender son, de hecho, plenamente francófonas o anglófonas; solo en ocasiones recurrí a un traductor en Burkina Faso. Sin embargo, las lenguas locales habrían sido en realidad indispensables si este estudio se hubiera centrado en el trabajo y las relaciones de producción (es decir, en el campo y en las empacadoras), y no en la distribución.

Otra cuestión es el tiempo. Más allá de las limitaciones prácticas de tiempo a las que se enfrentan la mayoría de los investigadores en el campo (al menos cuando el campo no se ubica cerca de casa), el objeto de estudio de buena parte de la etnografía multisituada contemporánea ni siquiera podría adecuarse a la duración del trabajo de campo que caracterizaba en el pasado a la antropología. En el caso del comercio transnacional de vegetales, donde la normativa, la política, las tecnologías y los mercados cambian con rapidez, me pareció necesario visitar todos los lugares en un plazo relativamente corto (quince meses) para observar cómo respondían a condiciones más o menos similares. La eficacia sobre el terreno, por tanto, era esencial, aunque a menudo se veía frustrada por las limitaciones de

las líneas telefónicas locales o por la gran variación de los horarios de las personas a las que necesitaba ver. Al final, sin embargo, el mayor problema no fue la falta de tiempo, sino el acceso limitado, como era de esperarse, a sitios como oficinas empresariales, salas de juntas y almacenes. Tener más tiempo no necesariamente mejoraría el acceso a esos lugares, pero podría abrir otros canales de información. En mi caso, las conversaciones fuera del horario de trabajo con personas que laboraban o que estaban familiarizadas con las empresas que me interesaban con frecuencia me brindaron observaciones y pistas útiles.

El problema del acceso se vincula con claridad al posicionamiento —es decir, a la cuestión de cómo identificarse y aliarse como investigador—. La cuestión, ampliamente debatida en otras fuentes,[8] tiene implicaciones éticas, epistemológicas y, a menudo, estratégicas, bastante inmediatas, en tanto puede abrir o cerrar puertas. Este, sin duda, es el caso del estudio de cadenas de comercialización donde muchos de los sujetos se enfrentan entre sí, ya sea como competidores o como partícipes de relaciones contractuales y de intercambio muy desiguales (y quizá inestables). En este caso, mi propio posicionamiento fue más sencillo, pues todos los participantes en el comercio afroeuropeo de vegetales se enfrentan a las mismas fuerzas: el mercado europeo, intensamente competitivo, los supermercados que exprimen los precios, el consumidor "paranoico", los medios de comunicación populares ávidos de escándalos. Aunque es evidente que los importadores, exportadores y agricultores no están equipados del mismo modo para enfrentar estas fuerzas, no fue difícil describirse ante todos estos grupos como alguien preocupado por el futuro del sector. Al compartir estas preocupaciones, la mayor parte de ellos estaba dispuesta y, en algunos casos, ansiosa por hablar conmigo.

Mi credibilidad también se vio beneficiada por el hecho de que mi investigación implicaba viajar mucho. En el comercio transnacional de productos frescos, el creciente uso de la internet y otras tecnologías de la comunicación no ha disminuido el valor que se concede al contacto cara a cara y a la experiencia en el sitio. Incluso los importadores británicos, que tal vez pasan 95% de su jornada laboral en oficinas corporativas con aire acondicionado, describieron

8 Por ejemplo, Coffey (1999), England (1994) y Haraway (1991).

su frustración al trabajar con representantes de supermercados "recién salidos de la universidad" y por completo ignorantes de las condiciones en África. Como yo acababa de llegar de Zambia y también había pasado un tiempo en el África francófona, así como en el mercado mayorista francés, pude evitar que se me etiquetara como "académica de torre de marfil" y, en cambio, me consideraran alguien que podía poseer información útil.

Dicho lo anterior, no cabe duda de que el alcance de mi investigación puso nerviosas por lo menos a algunas personas, pues sabían que hablaría con sus proveedores, clientes o competidores. Las declaraciones de confidencialidad no necesariamente tranquilizan a quienes, como en el caso del comercio francófono, están acostumbrados a que se incumplan las promesas o que, como en Zambia, trabajan en una comunidad tan pequeña e íntima que nadie es en realidad anónimo. Algunos miembros de esta comunidad también temían que yo fuera una espía de la empresa o, peor aún, una agente encubierta de la BBC.

Pero aunque la confidencialidad no les preocupara demasiado, muchas personas querían, comprensiblemente, ofrecer una imagen positiva de sí mismas y, por tanto, estaban más dispuestas a hablar de las debilidades y los errores de otro grupo que del suyo propio. En el mejor de los casos, podían admitir que en su entorno suceden cosas malas, que se cometen errores —pero no ellos—. Así, por ejemplo, los exportadores de Burkina Faso hablaron largo y tendido sobre la deslealtad de agricultores e importadores, pero atribuyeron la reputación de su gremio sobre tratos turbios a las prácticas de una minoría sin escrúpulos. En Zambia, los representantes de una de las empresas exportadoras culparon a la "mala gestión" de los agricultores subcontratados por la escasa calidad de los productos agrícolas, mientras que estos afirmaban que la empresa rechazaba productos en perfecto estado cada vez que el mercado se ralentizaba. De nuevo, las dificultades para conocer la historia completa difícilmente son exclusivas de la investigación multisituada. Pero, al menos en los estudios sobre cadenas de mercancías, este método aporta parte de la solución, pues la investigación en múltiples lugares permite una especie de control cruzado transnacional. El análisis de actores en distintos puntos de la cadena de mercancía no necesariamente revela quién miente o quién tiene la razón, pero sí ayuda a situar estas historias, tanto en el plano local como en

el contexto transnacional de la cadena de mercancía. En otras palabras, ayuda a comprender las contradicciones y ambigüedades tanto dentro de los relatos individuales como entre ellos.

Por último, el trabajo de campo en el comercio transnacional de alimentos frescos no puede dejar de plantear preguntas sobre las implicaciones políticas y normativas de la investigación. A los ojos de al menos algunos de los grupos asociados a las protestas antiglobalización contemporáneas, el ejote francés africano encarna las ironías e injusticias de la economía global de alimentos: producidos en países mal alimentados por personas que suelen ganar menos de un dólar al día, transportados con grandes gastos y consumidos por urbanitas acomodados que desprecian los productos de temporada de su región. Esta caracterización bastante acertada es capturada en un reciente documental británico de la televisión titulado *Mangetout*, que da a los empresarios del comercio anglófono buenas razones para preocuparse por la cobertura de los medios de comunicación. También les anima a destacar al menos tres aspectos positivos de su industria: en primer lugar, la exportación de productos hortofrutícolas en África emplea a decenas de miles de personas en zonas donde las opciones laborales son escasas; en segundo lugar, la mayor parte de estas personas son mujeres, cuyos sueldos son cruciales para el bienestar familiar; y en tercer lugar, las normas ambientales y laborales de la industria hortícola (al menos en países como Zambia, Kenia y Zimbabue) son más elevadas que en cualquier otro subsector agrícola. Todos estos elementos son también muy ciertos y proporcionan un sólido apoyo a la postura de que, en general, los países africanos se benefician de la demanda europea de frutas y verduras fuera de temporada, exóticas, cambray y otras frutas y vegetales frívolos.

En tanto la etnografía multisituada facilita la comprensión e incluso la empatía con las posiciones de diversos actores dentro de las controvertidas cadenas de mercancías, también complica la política de globalización. Pero una comprensión compleja no necesita ser paralizante. En el comercio hortícola afroeuropeo, un ámbito potencial para la acción progresista es el movimiento de comercio ético y, más en concreto, la Iniciativa de Comercio Ético (eti) apoyado por el Gobierno británico, que busca desarrollar códigos de conducta

que "mejoren las condiciones laborales en todo el mundo".[9] Esto de ninguna manera es un movimiento de base; aunque grupos como Oxfam y Christian Aid, así como varios sindicatos, están involucrados, entre sus mayores impulsores se encuentran los supermercados británicos, que intentan evitar las acusaciones de explotación que han salpicado, entre otros, al sector de calzado deportivo. No obstante, los códigos de conducta de la eti relacionados con el uso de pesticidas en los campos de producción, el saneamiento, el alojamiento de los trabajadores y la atención médica han sido adoptados por proveedores de productos frescos en Kenia, Zimbabue y Zambia. En estos tres países, por supuesto, las granjas hortícolas, en su mayoría de propiedad de blancos, no solo disponen de los medios financieros, sino también de buenas razones políticas (en el contexto de las tensiones domésticas en torno a la raza y la tierra) para mantener una imagen de "responsabilidad social". A medida que los códigos de conducta ignoran las distintas circunstancias de los países con escasa o nula agricultura empresarial, el comercio "ético" corre el riesgo de convertirse en comercio excluyente.

Pero esta posibilidad no es inevitable, porque la eti se ha convertido en un foro de debate —en conferencias, medios impresos, en línea— entre supermercados, proveedores, sindicatos, activistas e investigadores (con cierto sobrelapamiento en las últimas dos categorías). En el sector hortícola africano, algunos participantes en estos foros han solicitado que se desarrollen códigos que abarquen a más países, más productos (en concreto, de frutas tropicales) y más tipos de empresas (pequeñas explotaciones). Además, algunos han pedido que se redistribuya la carga financiera del comercio ético, de modo que los minoristas asuman parte de los costos que ahora recaen en los productores. En otras palabras, la eti se ha convertido en una plataforma para cuestionar no solo el alcance del comercio ético, sino también el equilibrio del poder global dentro de las cadenas de productos hortícolas. Un cuidadoso trabajo de campo cualitativo dentro de estas cadenas puede contribuir mucho a detallar y reforzar los argumentos a favor del cambio. De esta manera, es claro que las etnografías en/del sistema mundial (Marcus, 1998) tienen cabida en los foros y redes emergentes que son, al mismo tiempo, resultado y desafío para la globalización.

9 Sitio web de ETI, http://www.ethicaltrade.org/_html/about/faq/framesets/f_shell.shtml

Conclusión

En este artículo argumento que la etnografía comparativa multisituada ofrece una visión de las relaciones comerciales transnacionales que no necesariamente puede revelar la etnografía tradicional "monositio" o un análisis basado de manera exclusiva en la macroeconomía política. En el caso del comercio de verduras frescas de alto valor entre África y Europa, este enfoque nos ayuda a situar las culturas comerciales en historias coloniales, geografías físicas y la construcción de nociones como seguridad y calidad de los alimentos. En términos más generales, contribuye a un análisis crítico de la globalización, al distinguir entre las fuerzas supuestamente homogeneizadoras de la liberalización económica y la armonización normativa, y las diversas formas en las que los participantes en el comercio transnacional se adaptan a los cambios formales de la legislación y la política, se resisten a ellos o tal vez los ignoran.

Al mismo tiempo, como con cualquier otro método, es importante reconocer y, de hecho, anticipar los posibles obstáculos y los eventuales límites del conocimiento. En el caso de la etnografía multisituada, algunas de las limitaciones son puramente prácticas, pero otras son intrínsecas al tema de estudio, dado que muchas actividades y relaciones sociales no pueden observarse de forma convencional. Estos obstáculos exigen creatividad y colaboración en el terreno de estudio, así como franqueza y modestia en la presentación de los resultados. En el mejor de los casos, la propia estructura comparativa y multilateral de un proyecto de investigación de este tipo permite puertas que de otro modo permanecerían cerradas, a conciliar relatos en apariencia contradictorios o ambiguos y a identificar nuevas vías de investigación.

Reconocimientos

Agradezco al Programa de Antropología Cultural de la Fundación Nacional de Ciencias por invitarme a presentar la versión original de este artículo en la sesión patrocinada "Globalizing methodologies" en la reunión anual de la American Anthropological Association, San Francisco, California,

15-19 de noviembre de 2000. También agradezco a los revisores anónimos por sus útiles comentarios, y a Arouna Ouedraogo y Guy Scott por su perspicacia y ayuda en momentos cruciales tras la pista del ejote.

Referencias

Appadurai, A. (ed.). (1986). *The social life of things: commodities in cultural perspective*. Cambridge University Press.

Barrett, H., B. Ilbery, A. Browne y T. Binns. (1999). Globalization and the changing networks of food supply: the importation of fresh horticultural produce from Kenya into the UK. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *24*, 159-174.

Belasco, W. (1990). *Appetite for change*. Pantheon.

Bonanno, A. (ed.). (1994). *From Columbus to ConAgra: the globalization of agriculture and food*. University of Kansas Press.

Bové, J., F. Dufour y A. de Casparis. (2001). *The world is not for sale: farmers against junk food*. Verso.

Burawoy, M., J. Blum, S. George, Z. Gil, T. Gowan, L. Haney, M. Klawiter, S. Lopez, Ó. Riain y M. Thayer. (2000). *Global ethnography*. University of California Press.

Burnett, J. (1979). *Plenty and want: a social history of diet in England from 1815 to the present day*. Scolar Press.

Busch, L. y A. Juska. (1997). Beyond political economy: actor-networks and the globalization of agriculture. *Review of International Political Economy*, *4*, 668-708.

Chan, M.-K. y B. King. (2000). *Review of the implications of changes in EU pesticide legislation on the production and export of fruits and vegetables from developing country suppliers. NRI Report 2525*. Natural Resources Institute, University of Greenwich.

Coffey, A. (1999). *The ethnographic self: fieldwork and the representation of identity*. Sage.

Dickens, P. (1998). *Global shift: transforming the world economy*. Peter Chapman.

Dolan, C., J. Humphrey y C. Harris-Pascal. (1999). *Horticulture commodity chains: the impact of the uk market on the African fresh vegetable industry*. Institute of Development Studies, University of Sussex.

Douglas, M. (1984). *Food and the social order*. Russell Sage.

Ducrocq, C. (1999). *Distribution alimentaire: enjeux stratégiques et perspectives 1994––1998*. Les Echos.

England, K. (1994). Getting personal: reflexivity, positionality, and feminist research. *Professional Geographer*, *46*, 80-89.

Fine, B. (1994). Towards a political economy of food. *Review of International Political Economy*, *1*, 519-545.

Fine, B. y E. Leopold. (1993). *The world of consumption*. Routledge.

Fischler, C. (1993). *L'omnivore: le goût, la cuisine et la corps*. Odile Jacob.

Fitzsimmons, M. y D. Goodman. (1998). Incorporating nature: environmental narratives and the reproduction of food. En B. Braun y N. Castree (eds.), *Remaking reality: nature at the millennium* (pp. 194-220). Routledge.

Freidberg, S. (1997). Contacts, contracts and green bean schemes: liberalisation and agroentrepreneurship in Burkina Faso. *Journal of Modern African Studies*, *35*, 101-128.

Freidberg, S. (2001). To garden, to market: gendered meanings of work on an African urban periphery. *Gender, Place and Culture*, 8, 5-24.

Garrett, L. (1994). *The coming plague: newly emerging diseases in a world out of balance*. Farrar Straus and Giroux.

Gereffi, G. y M. Korzeniewicz. (1994). *Commodity chains and global capitalism*. Greenwood Press.

Goodman, D. (1997). World-scale processes and agro-food systems: critique and research needs. *Review of International Political Economy*, *4*, 663-687.

Goodman, D. y M. Redclift. (1991). *Refashioning nature: food, ecology and culture*. Routledge.

Goodman, D. y M. Watts (eds.). (1997). *Globalising food: agrarian questions and global restructuring*. Routledge.

Goodman, D., B. Sorj y J. Wilkinson. (1987). *From farming to biotechnology: a theory of agro-industrial development*. Basil Blackwell.

Graef, J. (1995). World market for fresh and canned baby corn. *RAP Market Information Bulletin*, núm. 5. http://www.iit.edu/~tulsanu/gaurav.html

Gregoire, E. y P. Labazée. (1993). *Les grands commerçants d'Afrique de l'Ouest*. Karthala / Orstom.

Haraway, D. J. (1991). Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial knowledge. En D. J. Haraway, *Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature* (pp. 183-201). Routledge.

Harris, M. (1986). *Good to eat: riddles of food and culture*. George Allen.

Jaffee, S. (1995). *Marketing Africa's high-value foods: comparative experiences of an emergent private sector*. Kendall / Hunt.

Kaplan, R. (1994). The coming anarchy: how scarcity, crime, overpopulation, tribalism, and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet. *Atlantic Monthly*, *273*, 44-76.

Labazée, P. (1994). Producteurs, consommateurs et marchands du Nord Ivoirien: aspects de la construction sociale des relations d'Échange. *Cahiers des Sciences Humaines*, *30*, 211-227.

Labazée, P. (1988). *Entreprises et entrepreneurs du Burkina Faso*. Karthala.

Larmet, G. (1999). *L'Organisation des Pratiques d'Approvisionnement Alimentaire*. inra.

Lockie, S. (2000). Beyond the farm gate: production-consumption networks and agri-food research. *Sociologia Ruralis*, *40*, 3-19.

Mackintosh, M. (1989). *Gender, class, and rural transition: agribusiness and the food crisis in Senegal*. Zed Books.

Mann, S. y J. Dickinson. (1978). Obstacles to the development of capitalist agriculture. *Journal of Peasant Studies*, *5*, 466-488.

Marcus, G. (1998). Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-sited ethnography. En G. Marcus (ed.), *Ethnography through thick and thin* (79-104). Princeton University Press.

Marsden, T. (1997). Creating space for food: the distinctiveness of recent agrarian development. En D. Goodman y M. Watts (eds.), *Globalizing food: agrarian questions and global restructuring* (pp. 169-191). Routledge.

Marsden, T., A. Flynn y M. Harrison. (2000). *Consuming interests: the social provision of foods*. ucl Press.

Mennell, S. (1985). *All manners of food: eating and taste in England and France from the Middle Ages to the present*. Basil Blackwell.

Mennell, S., A. Murcott y A. van Otterloo. (1992). *The sociology of food*. Sage.

Miller, D. (ed.). (1995). *Acknowledging consumption: a review of new studies*. Cambridge University Press.

Miller, D. (1997). *Capitalism: an ethnographic approach*. Berg.

Mitchell, K. (1997). Transnational discourse: bringing geography back in. *Antipode*, *29*, 101-114.

Murcott, A. (ed.). (1998). *The nation's diet: the social science of food choice*. Longman.

Murdoch, J., T. Marsden y J. Banks. (1999). Quality, nature and embeddedness: some theoretical considerations in the context of the food sector. *Economic Geography*, *75*, 107-125.

Preston, R. (1994). *The hot zone*. Random House.

Raikes, P., M. F. Jensen y S. Ponte. (2000). *Global commodity chain analysis and the french filière approach: comparison and critique*. Center for Development Research.

Sylvander, B. (1995). Conventions de qualité, concurrence, et coopération: cas du 'label rouge' dans la filière volailles. En G. Allaire y R. Boyer (eds.), *La grande transformation de l'agriculture: lectures conventionnalistes et regulationnistes* (73-96). Economica.

Teuteberg, H. (1992). *European food history: a research review*. St. Martin's Press.

Warde, A. (1997). *Consumption, food and taste*. Sage.

Whatmore, S. y L. Thorne. (1997). Nourishing networks: alternative geographies of food. En D. Goodman y M. Watts (eds.), *Globalising food: agrarian questions and global restructuring* (287-304). Routledge.

32. Introducción: las mercancías y la política del valor*[1]

Arjun Appadurai

Este capítulo tiene dos objetivos. El primero es introducir y establecer el contexto en que se enmarcan los ensayos que componen el presente volumen. El segundo es proponer una nueva perspectiva acerca de la circulación de las mercancías en la vida social. La esencia de esta perspectiva puede formularse del modo siguiente: el intercambio económico crea valor. El valor está contenido en las mercancías que se intercambian. Centrándose en las cosas que se intercambian, y no solo en las formas o las funciones del intercambio, es posible argüir que lo que crea la conexión entre intercambio y valor es la *política*, entendida en sentido amplio. Esta afirmación, por desarrollarse a lo largo del presente ensayo, justifica la idea de que las mercancías, así como las personas, tienen una vida social.[2]

---

1 Publicado originalmente en: A. Appadurai, 1986, Introduction: Commodities and the politics of value. En A. Appadurai (Ed.), *The social life of things: Commodities in cultural perspective* (3-63): Cambridge University Press.

*N. de T.: Este artículo es una reproducción de la traducción: Appadurai, A. (1991). Introducción: Las mercancías y la política del valor. En A. Appadurai (Ed.), *La vida social de las cosas: Perspectiva cultural de las mercancías* (A. Castillo Cano, Trad., 17-87). Editorial Grijalbo.

Se advierte al lector que algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias original, por lo que su ausencia en la traducción es una supresión de origen. Este texto es la introducción de dicho libro por lo cual las menciones que el autor hace a lo largo del artículo sobre "el volumen" u "otros capítulos", entre otras expresiones, se refieren a la obra completa publicada por Cambridge University Press.

2 Soy consciente de que, a partir del intercambio, estoy oponiéndose a una corriente de la nueva antropología económica que ha querido cambiar el centro de atención hacia, por un lado, la producción y, por el otro, el consumo. Esta corriente constituye una respuesta justificada a la excesiva preocupación en el intercambio y la circulación. Sin embargo, el ángulo mercantil promete iluminar aspectos en el estudio del intercambio que han comenzado a verse como aburridos o incorregiblemente misteriosos.

Las mercancías pueden definirse de forma provisional como objetos de valor económico. Con respecto a cómo debemos entender el término de valor económico, la guía más útil (aunque no la más común) la ofrece Georg Simmel. En el primer capítulo de *The philosophy of money* (1978), Simmel proporciona una descripción sistemática del modo en que se define mejor el valor económico. Para él, el valor nunca es una propiedad inherente de los objetos, sino un juicio acerca de ellos emitido por los sujetos. Con todo, la clave para la comprensión del valor, de acuerdo con Simmel, descansa en la región donde "la subjetividad es solo provisional y no verdaderamente muy esencial" (Simmel, 1978: 73).

Al explorar este intrincado dominio, el cual no es del todo subjetivo ni objetivo, donde el valor surge y funciona, Simmel sugiere que los objetos no son difíciles de adquirir porque sean valiosos, "sino que llamamos valiosos a esos objetos que se resisten contra nuestro deseo de poseerlos" (1978: 67). Lo que Simmel denomina *objetos* económicos en particular existen en el espacio comprendido entre el deseo puro y el disfrute inmediato, lo cual implica cierta distancia entre ellos y la persona que los desea, distancia que puede salvarse. Esta distancia se cubre en y mediante el intercambio económico, donde el valor de los objetos se determina recíprocamente. Es decir, el deseo de uno por un objeto se alcanza mediante el sacrificio de algún otro objeto, que es el centro del deseo de otro individuo. Tal intercambio de sacrificios constituye el tema de la vida económica, y la economía —como una forma social particular— "consiste no solo en *valores* intercambiables, sino también en el *intercambio* de valores" (1978: 80). El valor económico, para Simmel, se genera mediante este tipo de intercambio de sacrificios.

Varios argumentos se desprenden de este análisis del valor económico efectuado por Simmel. El primero reside en que el valor económico no es solo valor en general, sino también una suma definida de valores, el cual es producto de la proporción de dos intensidades de demanda. La forma que esta proporción adquiere es el intercambio de sacrificio y ganancia. Así, el objeto económico no tiene un valor absoluto como resultado de su demanda, sino que esta, en tanto base de un intercambio real o imaginario, dota al objeto de valor. El intercambio es el que establece los parámetros de utilidad y escasez, en lugar de que suceda al revés, y el intercambio es el que representa la fuente de valor:

> La dificultad de adquisición, el sacrificio ofrecido en el intercambio, es el único elemento constitutivo del valor, del cual la escasez es solo la manifestación externa, su objetivación en forma de cantidad (1978: 100).

En una palabra, el intercambio no es un subproducto de la valoración mutua de objetos, sino su fuente.

Estas breves y brillantes observaciones preparan el escenario para el análisis de lo que Simmel considera el instrumento más complejo en la conducción del intercambio económico —el dinero— y su lugar en la vida moderna. Sin embargo, las observaciones de Simmel pueden tomarse en una dirección muy distinta. Este camino alternativo, que se ejemplifica en lo que resta de este ensayo, motiva la exploración de las condiciones bajo las cuales los objetos económicos circulan en diferentes *regímenes de valor* en espacio y en tiempo. La mayoría de los ensayos, incluidos en este volumen, examinan cosas específicas (o grupos de cosas) tal como circulan en ambientes culturales e históricos particulares. Lo que estos ensayos ofrecen es una serie de ideas en torno a las formas en las cuales el deseo y la demanda, el sacrificio recíproco y el poder, interactúan para crear el valor económico en situaciones sociales específicas.

El sentido común occidental contemporáneo, construido con base en diversas tradiciones históricas en filosofía, derecho y ciencia natural, tiene una fuerte tendencia a oponer "palabras" y "cosas". Aunque este no ha sido siempre el caso aún en Occidente, como Marcel Mauss señala en su famoso trabajo *The gift*, la tendencia contemporánea predominante es considerar el mundo de las cosas como inerte y mudo, el cual es puesto en movimiento y animado, y en verdad conocible, solo mediante las personas y sus palabras (Dumont, 1980: 229-230). Sin embargo, en muchas sociedades históricas, las cosas no han estado tan divorciadas de la capacidad de actuar de las personas y del poder comunicativo de las palabras (cf. Capítulo II). El hecho de que tal percepción de las cosas no haya desaparecido, incluso en las condiciones del capitalismo industrial occidental, es una de las intuiciones que apoyan el célebre análisis de Marx, contenido en *El capital*, sobre el "fetichismo de las mercancías".

A pesar de que nuestro propio enfoque de las cosas esté necesariamente condicionado por la idea de que las cosas no tienen otros significados sino aquellos conferidos por las transacciones, las atribuciones y las motivaciones humanas, el problema antropológico reside en que esta verdad formal no ilumina la circulación concreta, histórica, de las cosas. Por ello debemos seguir a las cosas mismas, ya que sus significados están inscritos en sus formas, usos y trayectorias. Es solo mediante el análisis de estas trayectorias que podemos interpretar las transacciones y cálculos humanos que animan a las cosas. Así, aunque desde un punto de vista *teórico* los actores codifican la significación de las cosas, desde una perspectiva *metodológica* son las cosas-en-movimiento las que iluminan su contexto social y humano. Ningún análisis social de las cosas (efectuado por un economista, un historiador del arte o un antropólogo) puede evitar un grado mínimo de lo que podría llamarse fetichismo metodológico. Este fetichismo metodológico, que centra nuestra atención en las cosas mismas, es en parte un correctivo a la tendencia de sociologizar en exceso las transacciones en cosas, una tendencia que debemos a Mauss, como lo ha advertido recientemente Firth (1983: 89).[3]

Las mercancías, y las cosas en general, son de interés independiente para los distintos tipos de antropología. Constituyen el primer y último recurso de los arqueólogos. Son la sustancia de la "cultura material", que unifica a los arqueólogos con los diferentes tipos de antropólogos culturales. En tanto objetos de valor, se hallan en el corazón de la antropología económica; como medio de obsequio o dote, se ubican en el centro de la teoría del intercambio y de la antropología social en general. La perspectiva mercantil de las cosas representa un acceso útil al interés semióticamente revivido y orientado en la cultura material, el cual ha sido recién destacado y ejemplificado en una sección especial de *RAIN* (Miller, 1983). Con todo, las mercancías no solo son de gran importancia

3 En Alfred Schmidt (1976, p. 77) se halla una crítica similar en contra de la tendencia "idealista" de los estudios marxistas, la cual promueve la perspectiva de que "Marx habría resuelto todas las categorías económicas en relaciones entre los hombres y que, por tanto, no habría en el mundo cosas corpóreas y materiales, sino solo relaciones y procesos". Evidentemente, la adopción descuidada de este punto de vista puede conducir a exageraciones de tipo "vulgar".

para los antropólogos, constituyen también un tópico de vivo interés para los historiadores económicos y sociales, para los historiadores del arte y, no lo olvidemos, para los economistas, aunque cada disciplina aborde el problema de un modo diferente. Las mercancías representan, pues, un tema respecto del cual la antropología tiene algo que ofrecer a las disciplinas vecinas, así como un tema en relación con el cual tiene una buena oportunidad de aprender de ellas.

Los ensayos del presente volumen cubren una buena parte de terreno histórico, etnográfico y conceptual, pero de ningún modo agotan la relación entre cultura y mercancías. Los coautores son cinco antropólogos sociales, un arqueólogo y cuatro historiadores sociales. Ni los economistas ni los historiadores del arte están representados aquí, aunque sus puntos de vista no han sido de ningún modo ignorados. Algunas grandes áreas del mundo no están representadas (como China y América Latina), pero la cobertura espacial es, a pesar de ello, bastante amplia. Si bien en estos ensayos se examina una gama interesante de bienes, sería muy larga la lista de mercancías *no* analizadas, y existe una tendencia a retomar los bienes especializados o de lujo, en lugar de las mercancías "primarias" o "de volumen". Por último, la mayoría de los autores estudian los *bienes* y no los *servicios*, a pesar de que estos también sean, evidentemente, objetos importantes de mercantilización. No obstante que cada una de estas omisiones resulta significativa, sugeriré en el curso de este ensayo que algunas de ellas son menos importantes de lo que parecen.

Las cinco secciones de que se compone este ensayo se dirigen a los objetivos siguientes: la primera, sobre el espíritu de la mercancía, es un ejercicio crítico de definición, cuya tesis es que las mercancías propiamente entendidas no son monopolio de las economías modernas, industriales. La segunda, referida a las rutas y desviaciones, realiza las estrategias (tanto individuales como institucionales) que hacen de la creación del valor un proceso mediado por la política. La tercera, en torno al deseo y la demanda, vincula patrones de corto y largo plazo en la circulación de mercancías, para mostrar que el consumo está sujeto al control social y a la redefinición política. La sección menos sustantiva, la cuarta, sobre la relación entre conocimiento y mercancías, trata de demostrar que la

política del valor es en muchos contextos una política del conocimiento. La sección final vuelve a centrar la reflexión en la política, en tanto plano de mediación entre el intercambio y el valor.

Pocos negarían que la mercancía es una cosa profundamente socializada. Con fines definidores, la pregunta es: ¿en qué consiste su sociabilidad? La respuesta purista, atribuida de modo rutinario a Marx, es que la mercancía es un producto destinado sobre todo al intercambio, y que tales productos surgen, por definición, en las condiciones institucionales, psicológicas y económicas del capitalismo. Definiciones menos puristas consideran a las mercancías como bienes dirigidos al intercambio, con independencia de la forma que éste adopte. La definición purista cancela la indagación de manera prematura. Las definiciones más vagas amenazan equiparar mercancía con obsequio y muchas otras clases de cosas. En esta sección, por medio de una crítica de la comprensión marxista de la mercancía, sostendré que las mercancías son cosas que poseen un tipo particular de potencial social, que son discernibles de "productos", "objetos", "bienes", "artefactos" y otros tipos de cosas (aunque solo lo sean en ciertos aspectos y desde determinada perspectiva). Si mi tesis está bien fundada, de ella se seguirá que es útil, con fines definidores, considerar que las mercancías existen en una variedad muy amplia de sociedades (aunque con una intensidad y prominencia especial en las sociedades capitalistas modernas), y que existe una coincidencia inesperada entre Marx y Simmel acerca de las mercancías.

La tesis más elaborada e intelectualmente provocativa de la idea de mercancía aparece en el libro primero, sección primera, de *El capital* de Marx, aunque la noción se difundió en las discusiones de economía política del siglo xix. El propio análisis que hace Marx del concepto de mercancía constituye una parte central de su crítica de la economía política burguesa, y un punto de apoyo en la transición desde su pensamiento previo referido al capitalismo (véase en particular Marx, 1978) hasta su análisis completamente desarrollado de *El capital.* Hoy en día, la importancia conceptual de la idea de mercancía ha cedido ante la concepción neoclásica, marginalista, de *bienes*, y la palabra *mercancía*, utilizada por la economía neoclásica, solo se refiere a una subclase especial de bienes primarios y

ya no desempeña un papel analítico central. Esto no ocurre, por supuesto, en el caso de los enfoques marxianos en economía y sociología, o en el de los estudios neoricardianos (como el de Piero Sraffa), donde el análisis de la "mercancía" aún desempeña un papel teórico fundamental (Sraffa, 1965; Seddon, 1978).

No obstante, en la mayoría de los análisis económicos modernos (realizados fuera del campo de la antropología), el significado del término *mercancía* se ha estrechado hasta reflejar sólo una parte de la herencia de Marx y de los primeros exponentes de la economía política. Es decir, en la mayor parte de sus usos contemporáneos, las mercancías son tipos especiales de bienes manufacturados (o servicios) que solo se asocian al modo de producción capitalista y que, por tanto, solo existen en donde este ha penetrado. Así, aun en los debates actuales acerca de la protoindustrialización (Perlin, 1982), el tema en cuestión no es si las mercancías están asociadas al capitalismo, sino si ciertas formas organizacionales y técnicas asociadas al capitalismo son únicamente de origen europeo. En general, las mercancías son vistas como representaciones materiales típicas del modo de producción capitalista, aunque sean clasificadas como insignificantes y su contexto capitalista como incipiente.

Con todo, está claro que esto solo representa un acercamiento a una vertiente de la propia concepción de Marx acerca de la naturaleza de la mercancía. El tratamiento de esta en las primeras cien páginas de *El capital* constituye una de las partes más difíciles, contradictorias y ambiguas de la obra de Marx. Parte de una definición extremadamente amplia de la mercancía: "La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueran" (Marx, 1975: 43). Luego, avanza de modo dialéctico, mediante una serie de definiciones más parsimoniosas, lo cual permite la elaboración gradual del enfoque básico marxiano en materia de valor de uso y valor de cambio, el problema de la equivalencia, la circulación y el intercambio de productos, y la importancia del dinero. El desarrollo de esta concepción de la relación entre la forma mercancía y la forma dinero hace posible que Marx establezca su famosa distinción entre los dos tipos de la circulación de mercancías (mercancía-dinero-mercancía y dinero-mercancía-dinero),

donde esta última representa la fórmula general del capital. A lo largo de este movimiento analítico, las mercancías se vuelven intrincadamente ligadas al *dinero*, a un mercado impersonal y al valor de cambio. Aun en la forma simple de circulación (vinculada al valor de uso), las mercancías se relacionan mediante la capacidad de conmensurabilidad del dinero. Hoy día, en general, la vinculación de las mercancías a las formas sociales, financieras y de intercambio posindustriales se da por sentada, incluso por parte de aquellos que en otros aspectos no toman a Marx en serio.

Ahora bien, en los propios escritos de Marx se halla la base para emprender un enfoque de las mercancías mucho más amplio y más útil en términos interculturales e históricos, cuyo espíritu se atenúa tan pronto como él se enreda en los detalles del análisis del capitalismo industrial del siglo XIX. De acuerdo con su formulación, a fin de producir no meros productos, sino mercancías, el hombre debe producir valores de uso para otros, valores de uso sociales (1975: 50). Esta idea fue comentada por Engels en un paréntesis que introdujo en el texto de Marx: "Para transformarse en mercancía, el producto ha de transferirse por medio del intercambio a quien se sirve de él como valor de uso" (1975: 50). Aunque Engels se contenta con esta aclaración, Marx procede a trazar una serie compleja (y ambigua) de distinciones entre los productos y las mercancías; pero, con fines antropológicos, el pasaje clave merece citarse en extenso:

> Bajo todas las condiciones sociales, el producto del trabajo es objeto para el uso, pero solo una época de desarrollo históricamente determinada —aquella que presenta el trabajo gastado en la producción de un objeto útil como atributo "objetivo" de este último, o sea, como su valor— transforma el producto del trabajo en mercancía. Se desprende de esto que la forma simple de valor de la mercancía es a la vez la forma mercantil simple adoptada por el producto del trabajo y que, por tanto, el desarrollo de la forma de mercancía coincide también con el desarrollo de la forma de valor (1975: 5-76.)

La dificultad de distinguir, en esta formulación, el aspecto lógico del aspecto histórico ha sido tratada por Anne Chapman (1980), cuyo análisis abordaré más adelante. En el pasaje citado de *El capital*, el cambio de

producto a mercancía es examinado históricamente, pero la resolución es todavía muy esquemática, y no es fácil especificarla o probarla de un modo claro.

La cuestión es que Marx estaba aún atrapado por dos principios de la epistemología de mediados del siglo xix: en primer lugar, sólo podía concebir la economía en relación con los problemas de la producción (Baudrillard, 1980); en segundo, consideraba el movimiento hacia la producción de mercancías como evolutivo, unidireccional e histórico. Como resultado de ello, las mercancías existen o no existen, y son *productos* de un tipo particular. Cada una de estas presuposiciones requiere ser modificada.

A pesar de las limitaciones epistemológicas, en su famoso análisis del fetichismo de las mercancías, Marx advierte, como lo hace en otros pasajes de *El capital*, que

> ...la *forma de mercancía* es la más general y la menos evolucionada de la producción burguesa —a lo cual se debe que aparezca tempranamente, aun cuando no de la misma manera dominante y por tanto característica que adopta en nuestros días— (1975: 101).

A pesar de que rebasa los objetivos del presente ensayo el explorar las dificultades del pensamiento de Marx referido a las economías precapitalistas, no estatales y no monetarias, podemos señalar que Marx deja la puerta abierta a la existencia de mercancías, al menos en su forma primitiva, en muchos tipos de sociedad.

La estrategia de definición que propongo es centrarnos en la corrección que hace Engels de la amplia definición marxiana sobre la producción de valor de uso *para otros*, la cual coincide con el énfasis otorgado por Simmel al intercambio como fuente del valor económico. Empecemos con la idea de que una mercancía es *cualquier cosa destinada al intercambio*. Esto nos aparta de la preocupación exclusiva en torno al "producto", la "producción" y la intención original o predominante del productor, y nos permite consagrarnos a la dinámica del intercambio. Con fines comparativos, pues, la pregunta no sería: "¿qué es una mercancía?", sino "¿qué tipo de intercambio es el intercambio mercantil?". Aquí, y como parte del esfuerzo por definir mejor a las mercancías,

necesitamos abordar dos tipos de intercambio que suelen oponerse formalmente al intercambio mercantil. EI primero es el trueque (a veces llamado intercambio directo); el segundo, el intercambio de obsequios. Comencemos con el trueque.

El trueque, como forma de intercambio ha sido analizado recientemente por Chapman (1980) en un ensayo que, entre otras cosas, discrepa con el análisis de Marx sobre la relación entre intercambio directo e intercambio mercantil. Con base en la combinación de aspectos de algunas definiciones actuales del trueque (incluyendo la de Chapman), sostengo que el trueque es el intercambio de objetos que se efectúa *sin* una referencia al dinero y *con* la máxima reducción posible de costos de transacción sociales, culturales, políticos y personales. El criterio anterior distingue trueque de intercambio mercantil en el estricto sentido marxista, y este último del intercambio de obsequios (con independencia de la forma en que se le defina). Chapman está en lo correcto cuando afirma que, hasta donde la teoría del valor de Marx es tomada seriamente, su tratamiento del trueque plantea problemas teóricos y conceptuales insolubles (Chapman, 1980: 68-70), ya que Marx postula que el trueque asume la forma directamente intercambiable del producto *(x* valor de uso A = y valor de uso B), así como también la forma directamente intercambiable de la mercancía (*x* mercancía A = y mercancía B). Sin embargo, esta visión marxiana del trueque, cualquiera que sean los problemas que plantee a la teoría marxista del origen del valor de cambio, tiene la virtud de acoplarse bien a la formulación más persuasiva de Chapman: a saber, que el trueque, ya sea como una forma predominante o subordinada de intercambio, existe en una variedad extremadamente amplia de sociedades. Chapman crítica a Marx por introducir a la mercancía en el trueque, y pretende mantener mercancía y trueque bien separados, basándose en el planteamiento de que las mercancías son utilizadas como objetos monetarios (y, por tanto, como valor o cristalización de trabajo), y no solo el dinero, en tanto unidad contable o medida de equivalencia. Para Chapman, el intercambio mercantil solo ocurre cuando un objeto monetario interviene en el intercambio. Debido a que el trueque excluye, en su modelo, tal intervención, el intercambio mercantil y el trueque son formal y completamente distintos, aunque puedan coexistir en ciertas sociedades (1980: 67-68).

En mi opinión, Chapman adopta, en su crítica a Marx, una perspectiva excesivamente estrecha del papel desempeñado por el dinero en la

circulación mercantil. A pesar de que Marx halló dificultades en su análisis de la relación entre trueque e intercambio mercantil, tuvo razón al destacar, como Polanyi, la existencia de una *comunidad de espíritu* entre trueque e intercambio mercantil capitalista, una comunidad vinculada (en esta perspectiva) a la naturaleza asocial, relativamente impersonal, centrada en el objeto, de ambos. En las diversas formas simples de trueque, advertimos un esfuerzo dirigido a intercambiar cosas sin, por una parte, las limitaciones de la sociabilidad y, por otra, las complicaciones del dinero. En el mundo contemporáneo, el trueque va en aumento: se estima que alrededor de doce mil millones de dólares en bienes y servicios se intercambian cada año en Estados Unidos. El trueque internacional (jarabe de Pepsico por vodka rusa; coca-cola por palillos coreanos y elevadores de carga búlgaros, por citar algunos ejemplos) está convirtiéndose también en una compleja economía alternativa. En estas situaciones, el trueque es una respuesta al creciente número de barreras impuestas al comercio y las finanzas internacionales, y desempeña un papel específico en la economía general. El trueque, como una forma de comercio, vincula el intercambio de mercancías a circunstancias sociales, tecnológicas e institucionales muy distintas. En consecuencia, el trueque puede verse como una forma especial de intercambio mercantil; una forma en la cual, por diversos motivos, el dinero no desempeña ningún papel o uno completamente indirecto (como mera unidad contable). Con base en esta definición de trueque, es difícil localizar alguna sociedad humana donde el intercambio mercantil sea por completo irrelevante. En apariencia, el trueque es la forma del intercambio mercantil en la que la circulación de cosas está más divorciada de las normas sociales, políticas y culturales. Con todo, dondequiera que se disponga de evidencias, la determinación de qué puede trocarse, dónde, cuándo y entre quiénes, así como qué conduce a la demanda de los bienes del otro, es una cuestión social. Existe una arraigada tendencia a considerar esta regulación social como un asunto muy negativo, de modo que el trueque efectuado en sociedades a pequeña escala y en periodos tempranos suele verse como algo restringido al plano *intercomunitario* y no al plano *intracomunitario.* De acuerdo con este modelo, el trueque se halla en proporción inversa a la sociabilidad, y el comercio internacional,

por extensión, es considerado como "predecesor" del comercio doméstico (Sahlins, 1972). Sin embargo, existen sólidas razones empíricas y metodológicas para cuestionar esta perspectiva.

La noción de que el comercio en las economías no monetizadas y preindustriales es visto por lo general como antisocial desde el punto de vista de las comunidades vecinas y, por tanto, como algo restringido a menudo a tratos con los forasteros, tiene su contraparte en la perspectiva de que el espíritu del obsequio y el de la mercancía son profundamente opuestos. Según este planteamiento, el intercambio de obsequios y el mercantil son en su fundamento contrarios y mutuamente excluyentes. A pesar de que han habido algunos recientes y notables intentos por silenciar el exagerado contraste entre Marx y Mauss (Hart, 1982; Tambiah, 1984), prevalece la tendencia a concebir estas dos modalidades del intercambio como fundamentalmente opuestas, tendencia que se ha convertido en una importante característica del discurso antropológico (Dumont, 1980; Hyde, 1979; Gregory, 1982; Sahlins, 1972; Taussig, 1980).

La exageración y reificación de la oposición entre obsequio y mercancía en los textos antropológicos tiene diversos orígenes. Entre ellos se halla la tendencia a romantizar las sociedades a pequeña escala; a mezclar el valor de uso (en el sentido marxiano con la *Gemeinschaft* (en el sentido de Toennie); a olvidar que las sociedades capitalistas funcionan también de acuerdo con propósitos culturales y a marginalizar y subestimar las características planificadoras, impersonales y autoexaltadoras de las sociedades no capitalistas. Estas tendencias, a su vez, son producto de una perspectiva simplificada de la oposición entre Mauss y Marx que, como ha sugerido Keith Hart (1982), pasa por alto aspectos importantes de las coincidencias entre ellos.

Los obsequios, y el espíritu de reciprocidad, sociabilidad y espontaneidad con el cual son típicamente intercambiados, suelen concebirse en rigurosa oposición al espíritu calculador, egoísta y orientado a la ganancia de la circulación mercantil. Además, mientras que los obsequios vinculan cosas a personas e introducen el flujo de las cosas en aquel de las relaciones sociales, las mercancías representan la transmisión —en

gran medida libre de limitaciones morales o culturales— de bienes de uno a otro flujos, transmisión que es mediada por el dinero y no por la sociabilidad. Muchos de los ensayos incluidos en este volumen, así como mi propia argumentación, se dirigen a mostrar que la anterior es una serie simplificada y exagerada de oposiciones. Por el momento, propondré un rasgo importante que es compartido por el intercambio de obsequios y la circulación de mercancías.

Mi punto de vista sobre el espíritu del intercambio de obsequios debe mucho a Bourdieu (1977), quien ha desarrollado un aspecto hasta la fecha subestimado del análisis de Mauss en torno al obsequio (Mauss, 1976), el cual destaca ciertos paralelos estratégicos entre el intercambio de obsequios y las prácticas más ostensiblemente "económicas". La argumentación de Bourdieu, que destaca la dinámica temporal de obsequiar, incluye un examen inteligente del espíritu común que subyace tanto al intercambio de obsequios como a la circulación mercantil:

> Si es cierto que el lapso temporal interpuesto permite que el obsequio y el contraobsequio sean vistos y experimentados como un acto inaugural de generosidad, sin pasado ni futuro, es decir, sin *cálculo*, entonces queda claro que, al reducir lo politético a lo monotético, el objetivismo destruye la especificidad de todas las prácticas que, como el intercambio de obsequios, tienden o pretenden poner en suspenso la ley del egoísmo. Un contrato racional condensaría en un instante una transacción que disfraza el intercambio de obsequios, al extenderla en el tiempo; por ello, el intercambio de obsequios es, si no el único modo practicado de circulación mercantil, al menos el único modo reconocido completamente en sociedades que, debido a que niegan "la verdadera suciedad de su vida", corno señala Lukács, tienen una economía en sí y no para sí (Bourdieu, 1977: 171).

Este tratamiento del intercambio de obsequios en tanto forma particular de la circulación mercantil surge de la crítica realizada por Bourdieu no sólo de las aproximaciones "objetivistas" de la acción social, sino también de cierto tipo de etnocentrismo, en sí mismo un producto histórico del capitalismo,

que adopta una definición muy restringida del interés económico.[4] Bourdieu sostiene que "la práctica nunca cesa de conformarse al cálculo económico, incluso en los casos en que muestre la apariencia de desinterés, al desviarse de la lógica del cálculo interesado (en el sentido estricto), y al pretender que no es material y difícilmente cuantificable" (1977: 177).

Utilizo este argumento para coincidir, aunque desde un ángulo un poco distinto, con las propuestas de Tambiah (1984), Baudrillard (1969; 1980; 1989), Sahlins (1976) y Douglas e Isherwood (1981), todas las cuales representan esfuerzos para restaurar la dimensión cultural de las sociedades que muy a menudo son representadas sólo como economías grandes por mandato, y para restaurar la dimensión de cálculo de las sociedades que con demasiada frecuencia son retratadas como solidariamente pequeñas por mandato. Parte de la dificultad implicada en el análisis intercultural de las mercancías reside en que, al igual que en otros aspectos de la vida social, la antropología es dualista en exceso: "nosotros y ellos"; "materialista y religioso"; "objetivación de las personas" contra "personificación de las cosas"; "intercambio de mercado" contra "reciprocidad", y así de forma sucesiva. Estas oposiciones parodian ambos polos y reducen de modo artificial las diferencias humanas. Un síntoma de este problema ha sido la concepción excesivamente positivista de la mercancía, en tanto cierto *tipo* de cosa, que restringe el análisis a la decisión referida a *qué tipo* de cosa es. Sin embargo, al tratar de comprender el rasgo distintivo del intercambio mercantil, no tiene sentido diferenciarlo de manera clara ya sea del trueque o del intercambio de obsequios. Como sugiere Simmel (1978: 97-98), es importante advertir la dimensión de cálculo contenida en todas estas formas de intercambio,

4 El uso de términos como *interés* y *cálculo* ocasiona problemas importantes acerca del estudio comparativo de la valoración, el intercambio, el comercio y los obsequios. A pesar de que es grave el peligro de exportar presuposiciones y modelos utilitarios (así como sus parientes, el economismo y el individualismo euroamericano), resulta asimismo tendencioso reservar para el hombre occidental el "interés" en el toma y daca de la vida material. Lo que se necesita, y aún es inexistente, excepto en embrión (cf. Medick y Sabean, 1984), es un marco para el estudio comparativo de las economías, en donde la variabilidad cultural del "yo", la "persona" y el "individuo" (de acuerdo con Geertz y Dumont) se una al estudio comparativo del cálculo (siguiendo a Bourdieu) y del interés (siguiendo a Sahlins). Solo después de haber desarrollado dicho marco, podremos estudiar de un modo genuinamente comparativo los motivos, los instrumentos y el carácter distinto de la actividad económica.

aunque varíen en la forma y la intensidad de sociabilidad asociada a ellas. Ahora, es menester caracterizar el intercambio mercantil desde la perspectiva de la comparación y el proceso.

Vamos a abordar las mercancías como cosas que se hallan en una situación determinada, la cual puede caracterizar muchos tipos distintos de cosas, en diferentes puntos de su vida social. Esto significa centrarse en el potencial mercantil de todas las cosas, en lugar de buscar inútilmente la distinción mágica entre mercancías y otros tipos de cosas. Asimismo, representa romper con la perspectiva marxista de la mercancía, dominada por la producción, y retomar su trayectoria *total*, desde la producción hasta el consumo, pasando por el intercambio/distribución.

Con todo, ¿cómo podemos definir la situación mercantil? Propongo que *la situación mercantil en la vida social de cualquier "cosa" se define como la situación en la cual su intercambiabilidad (pasada, presente o futura) por alguna otra cosa se convierta en su característica socialmente relevante*. Más aún, la situación mercantil, delimitada de este modo, puede dividirse en: a) la fase mercantil de la vida social de cualquier cosa; b) la candidatura mercantil de cualquier cosa y c) el contexto mercantil donde puede colocarse cualquier cosa. Cada uno de estos aspectos de "mercantilización" necesita ser explicado.

La idea de fase mercantil en la vida social de una cosa es un modo conciso de capturar la idea central del importante ensayo de Igor Kopytoff incluido en este volumen, donde ciertas cosas se conciben en el marco de un proceso de entrada y salida del estado mercantil. En la sección siguiente, añadiré otros comentarios sobre el enfoque biográfico de las cosas, pero, por el momento, quiero destacar que las cosas pueden entrar y salir del estado mercantil, y que tales movimientos pueden ser lentos o rápidos, reversibles o terminales, normativos o desviados.[5] A pesar de que el aspecto biográfico de ciertas cosas (como los bienes heredados, las estampillas postales y las antigüedades) puede ser más notorio que el de

5 Simmel (1978: 138), en un contexto muy distinto, anticipa la noción de que las cosas se mueven dentro y fuera del estado mercantil, y destaca su herencia aristotélica.

otras (como las barras de acero, la sal y el azúcar), este componente nunca es irrelevante por completo.

La *candidatura* mercantil de las cosas es menos temporal que un rasgo conceptual, y se refiere a los estándares y criterios (simbólicos, clasificatorios y morales) que definen la intercambiabilidad de las cosas en un contexto social e histórico particular. A primera vista, esta característica podría interpretarse como el marco *cultural* dentro del cual se clasifican las cosas, lo cual constituye la preocupación central del ensayo de Kopytoff. Sin embargo, esta interpretación oculta una variedad de problemas. Es cierto que, en las sociedades más estables, sería posible descubrir una estructura taxonómica que defina el mundo de las cosas, agrupando algunas, discriminando otras, atribuyendo significados y valores a estos grupos, y suministrando la base de las reglas y prácticas que gobiernan su circulación. En el caso de la economía (es decir, del intercambio), la descripción de Paul Bohannan (1955) sobre las esferas del intercambio entre los tiv representa un ejemplo evidente de este tipo de marco para el intercambio. Empero, hay dos tipos de situaciones donde los estándares y criterios que gobiernan el intercambio son tan tenues que parecen virtualmente ausentes. El primero es el caso de las transacciones efectuadas a través de las fronteras culturales, donde lo único que se acuerda es el precio (ya sea monetario o no) y donde no existe un conjunto mínimo de convenciones con respecto a la transacción mismas.[6] El segundo es el caso de aquellos intercambios intraculturales donde, a pesar de la existencia de un vasto universo de entendimientos compartidos, el intercambio específico se basa en percepciones profundamente divergentes del valor de las cosas intercambiadas. El mejor ejemplo de tal divergencia intracultural en materia de valor se encuentra en las situaciones de extrema penuria (como el hambre o la guerra), donde la lógica de los intercambios tiene poco que ver con la conmensurabilidad de los sacrificios. De este modo, el hombre bengalí que entrega a su esposa a la prostitución a cambio de comida, o la mujer turkana que vende sus joyas personales para comprar alimentos, establecen transacciones que pueden ser vistas como legítimas en circunstancias

6 Gray (1984) realiza un excelente análisis, aunque influido por Simmel, sobre las divergencias de valor que pueden moldear la naturaleza del intercambio efectuado a través de confines culturales. Su estudio de las subastas de corderos en la zona fronteriza angloescocesa representa un útil ejemplo etnográfico de lo que he denominado contiendas de valor.

extremas, pero que difícilmente pueden considerarse operativas de acuerdo con el rico marco de valores compartido por el vendedor y el comprador. Otra forma de caracterizar tales situaciones es sostener que, en tales contextos, el valor y el precio se han separado casi por completo.

Asimismo, como lo ha destacado Simmel, desde el punto de vista del individuo y su subjetividad, *todo* intercambio puede tener este tipo de discrepancia entre los sacrificios del comprador y los del vendedor, discrepancia que por lo regular se pasa por alto debido al sinnúmero de convenciones acerca del intercambio que *son* observadas por ambas partes (Simmel, 1978: 80). Podemos hablar entonces del marco cultural que define la candidatura mercantil de las cosas, pero debemos tener en mente que algunas situaciones de intercambio, tanto interculturales como intraculturales, se caracterizan por un conjunto más superficial de estándares compartidos de valor que otras. Por ello prefiero usar el término *regímenes de valor*, que no implica que todo acto de intercambio mercantil presuponga una completa comunión cultural de presuposiciones, sino que el grado de coherencia del valor puede variar grandemente de situación en situación y de mercancía en mercancía. Un régimen de valor, en este sentido, es consistente tanto con la comunión muy alta como con la muy baja de estándares entre las partes respecto de un intercambio mercantil particular. Tales regímenes de valor dan cuenta de la constante trascendencia de las fronteras culturales mediante el flujo de mercancías, donde la cultura se entiende como un sistema de significados limitado y localizado.

Por último, el *contexto* mercantil alude a la variedad de arenas sociales, dentro o entre unidades *culturales*, que ayudan a vincular la candidatura mercantil de la cosa a la fase mercantil de su carrera. Así, en muchas sociedades, las transacciones matrimoniales pueden constituir el contexto donde las mujeres sean vistas de forma más intensa y apropiada como valores de cambio. Los tratos con extraños pueden suministrar contextos para la mercantilización de las cosas que, de otro modo, están protegidas en contra de la mercantilización. Las subastas acentúan la dimensión mercantil de los objetos (tales como las obras de arte), lo cual puede considerarse profundamente inapropiado en otros contextos. Quizá los contextos de bazar promuevan los flujos mercantiles de una manera en

que no podrían hacerlo los escenarios domésticos. La variedad de tales contextos, dentro y por medio de las sociedades, proporciona el vínculo entre el ambiente social de la mercancía y su estado temporal y simbólico. Como ya lo he sugerido, el contexto mercantil, en tanto asunto social, puede reunir actores de muy distintos sistemas culturales, quienes solo comparten el mínimo entendimiento (desde el punto de vista conceptual) acerca de los objetos en cuestión y *solo* están de acuerdo en los términos del comercio. El fenómeno llamado comercio silencioso constituye el ejemplo más claro del acuerdo mínimo entre las dimensiones cultural y social del intercambio mercantil (Price, 1980).

En consecuencia, la mercantilización descansa en la compleja intersección de factores temporales, culturales y sociales. En la medida que algunas cosas se hallen con frecuencia en la fase mercantil, cumplan con los requisitos de la candidatura mercantil y aparezcan en un contexto mercantil, estas cosas son en esencia mercancías. Siempre que muchas o la mayoría de las cosas de una sociedad satisfagan en ocasiones esos criterios, puede decirse que dicha sociedad es altamente mercantil. En las sociedades capitalistas modernas, la mayor parte de las cosas suelen experimentar una fase mercantil en sus propias trayectorias, la mayor parte de los contextos se convierten en legítimos contextos mercantiles, y los estándares de la candidatura mercantil abarcan una porción más amplia del mundo de las cosas que en las sociedades no capitalistas. Así, aunque Marx estaba en lo correcto al considerar que el capitalismo industrial moderno implica el tipo de sociedad más intensamente mercantilizado, la comparación de las sociedades con base en su grado de "mercantilización" es un asunto más complejo, dado el enfoque operacional aquí adoptado.

Con fundamento en esta definición, el término *mercancía* se utiliza en lo que resta de este ensayo para referirse a cosas que, en cierta *fase* de su trayectoria y en un *contexto* particular, cubren los requisitos de la candidatura mercantil. El reciente análisis de Keith Hart (1982) sobre la importancia de la creciente hegemonía de la mercancía en el plano mundial coincide con nuestra aproximación, aunque para nosotros la mercantilización constituye un proceso diferente (que afecta de un modo distinto los aspectos de fase, contexto y

categorización) y el modo capitalista de mercantilización interactúa con un sinnúmero de formas sociales indígenas de mercantilización.

Vale la pena mencionar tres conjuntos adicionales de distinciones entre las mercancías (otras diferenciaciones se examinarán más adelante). El primero, que es una aplicación modificada de la distinción original planteada por Jacques Maquet (1971)[7] a propósito de las producciones estéticas,[8] divide a las mercancías en los cuatro tipos siguientes: (a) mercancías por *destino*, es decir, objetos dirigidos por sus productores principalmente al intercambio; (b) mercancías por *metamorfosis*, cosas destinadas a otros usos que son colocadas en el estado mercantil; (c) un caso especial de las mercancías por metamorfosis son las mercancías por *desviación*, objetos colocados en el estado mercantil, aunque original y específicamente protegidos contra él, *y* (d) *ex mercancías*, cosas retiradas, ya sea temporal o permanentemente, del estado mercantil y situadas en algún otro estado. Asimismo, resulta útil distinguir las mercancías "homogéneas" de las "singulares", con objeto de separar las mercancías cuya candidatura para el estado mercantil dependa justo de sus características de clase (una barra de acero perfectamente estandarizada, indistinguible en términos prácticos de cualquier otra barra de acero), de aquellas cuya candidatura esté en función de su singularidad *dentro* de una clase determinada (un Manet en vez de un Picasso; cierto Manet en lugar de otro Manet). Muy cercana, aunque no idéntica, es la distinción entre las mercancías primarias y las secundarias; entre las necesarias y las suntuarias, y entre lo que yo llamo mercancías móviles y las estáticas. No obstante, todos los esfuerzos dirigidos a definir las mercancías están condenados a la esterilidad, a menos de que iluminen las mercancías en movimiento. Este es el principal objetivo de la sección siguiente.

Rutas y desviaciones

Las mercancías suelen representarse como productos mecánicos de los regímenes de producción gobernados por las leyes de la oferta y la demanda.

7 N. de T.: Esa cita no consta en la lista final de referencias. Es una supresión de origen.

8 Estoy en deuda con Graburn (1976), cuyo uso de la terminología original de Maquet, en su clasificación de arte étnico y turístico, inspiró mi propia adaptación.

Mediante el uso de ciertos ejemplos etnográficos, espero mostrar en esta sección que el flujo de las mercancías en una situación dada es un arreglo que se desplaza entre rutas socialmente reguladas y desviaciones competitivamente inspiradas.

Las mercancías, tal cual lo destaca Igor Kopytoff, pueden concebirse de forma provechosa como si tuvieran historias vitales. En este enfoque de proceso, la fase mercantil en la historia vital de un objeto no agota su biografía; está culturalmente regulada, y su interpretación queda abierta en cierto grado a la manipulación individual. Más aún, como también subraya Kopytoff, la pregunta de qué tipos de objetos pueden tener qué clases de biografías es más una cuestión de competencia social y gusto individual en las sociedades modernas, que en aquellas de pequeña escala, no monetizadas y preindustriales. Existe, en el modelo de Kopytoff, un perpetuo y universal estira y afloja entre la tendencia de toda economía a expandir la jurisdicción de la mercantilización y la tendencia de toda cultura a restringirla. En esta perspectiva los individuos, pueden elegir la tendencia que convenga a sus intereses o la que se ajuste a su sentido de idoneidad moral, aunque en las sociedades premodernas el espacio de maniobra no es a menudo amplio. De entre las muchas virtudes del modelo de Kopytoff, la más importante, en mi opinión, es la que propone un modelo general de proceso de la mercantilización donde los objetos entran y salen del estado mercantil. Me siento menos a gusto con la oposición entre singularización y mercantilización, ya que algunos de los casos más interesantes (respecto de los cuales Kopytoff admite que se hallan en una zona intermedia de su contraste típico-ideal) involucran la más o menos permanente mercantilización de las singularidades. Dos asuntos pueden plantearse en relación con este aspecto de la argumentación de Kopytoff. Uno sería que la definición misma de lo que constituye las singularidades, en tanto opuestas a las clases, es una cuestión cultural, del mismo modo en que pueden existir ejemplos únicos de las clases homogéneas (la barra de acero perfecta) y clases de singularidades culturalmente valuadas (como las obras de arte y las creaciones de diseñadores de alta costura). Por una parte, la crítica marxista de esta oposición sugeriría que es la mercantilización, como proceso histórico mundial, la que determina de muchas

maneras importantes la cambiante relación entre las cosas singulares y homogéneas en cualquier momento dado de la vida de una sociedad. Sin embargo, el aspecto significativo reside en que la mercancía no es un tipo de cosa en vez de otro, sino una fase en la vida de algunas cosas. Aquí, Kopytoff y yo estamos completamente de acuerdo. Este enfoque de las mercancías y la mercantilización tiene varias implicaciones importantes, algunas de las cuales son abordadas en la argumentación de Kopytoff. Otras se analizan más tarde en este ensayo. Con todo, mi preocupación inmediata tiene que ver con un aspecto relevante de esta perspectiva temporal sobre la mercantilización de las cosas, el cual alude a lo que he denominado rutas y desviaciones. Debo ambos términos, así como cierto grado de mi comprensión sobre la relación entre ellos, a la aportación de Nancy Munn (1983), publicada en una importante colección de ensayos referidos a un fenómeno de gran significación para el tema abordado en el presente libro, a saber, el célebre sistema kula del Pacífico Occidental (Leach y Leach. 1983).

La kula es el ejemplo mejor documentado de un sistema de intercambio no occidental, preindusirial, no monetizado y translocal; además, con base en la publicación de esta reciente colección de ensayos, se convierte en el ejemplo más profunda y fructíferamente analizado. En apariencia, la ya clásica descripción de Malinowski de este sistema (Malinowski, 1973) resulta parcial y problemática, aunque sentó las bases para efectuar análisis en la materia más sofisticados. Son varias las implicaciones de la reconsideración contemporánea del fenómeno kula, en lo que respecta a las preocupaciones generales de este volumen. Aunque los ensayos incluidos en el presente libro reflejan distintas perspectivas, tanto etnográficas como teóricas, permiten formular ciertas observaciones generales.

La kula es un sistema regional extremadamente complejo de circulación de tipos particulares de objetos valiosos, comúnmente establecido entre los habitantes acaudalados del grupo insular Massim, perteneciente al estado de Papúa, Nueva Guinea. Los principales objetos intercambiados son de dos tipos: collares decorados (que circulan en una dirección) y brazaletes de conchas (que circulan en la dirección contraria). Estos objetos valiosos adquieren biografías muy específicas al moverse de lugar en lugar y de

mano en mano; del mismo modo, los hombres que los intercambian ganan o pierden prestigio al adquirir, retener o desprenderse de estos objetos. El término *keda* (cuyo significado es 'camino', 'ruta', 'sendero' o 'curso') se usa en algunas comunidades massim para describir el viaje experimentado por los objetos valiosos de isla en isla. Sin embargo, *keda* también tiene un conjunto más difuso de significados, que se refieren a los lazos más o menos estables, desde el punto de vista social, político y de la reciprocidad, sostenidos entre los hombres que integran esos caminos. De un modo más abstracto, *keda* alude a la ruta (creada mediante el intercambio de los objetos valiosos) hacia la riqueza, el poder y el prestigio de los hombres que poseen tales objetos (Campbell, 1983: 203-204).

En consecuencia, *keda* es un concepto polisémico que reúne la circulación de objetos, la producción de recuerdos y prestigio, y la persecución de la distinción social por medio de estrategias de asociación. Los delicados y complejos vínculos entre los hombres y las cosas, que son centrales en la política del *keda*, se describen en el extracto siguiente, que versa sobre la isla de Vakuta:

> El keda exitoso está compuesto de hombres que son capaces de mantener asociaciones relativamente estables (mediante habilidades oratorias y manipuladoras), y de trabajar en equipo (por medio de la interpretación de los movimientos mutuos). No obstante, muchos kedas desaparecen, y suele volverse necesaria la reagrupación. En ocasiones, se forman kedas completamente diferentes; en otras, los ex miembros se asocian con nuevos individuos; en otras más, los sujetos ya no pueden establecer la kula, debido a su incapacidad para constituir un nuevo keda, incapacidad basada en su reputación de haber realizado una "mala" kula. En realidad, la población de conchas valiosas en cualquier keda es migratoria, y la composición social del keda, transitoria. La acumulación de historia en torno a las conchas valiosas experimenta retrasos, a causa del continuo movimiento interkeda: los reclamos de inmortalidad de los hombres se desvanecen al perderse el intercambio de conchas, como resultado de la atracción ejercida en algunos de ellos por otros kedas, y los objetos valiosos adoptan entonces la identidad de sus nuevos propietarios (Campbell, 1983: 218-219).

La ruta seguida por estos objetos valiosos es tanto un reflejo como un elemento constitutivo de las asociaciones sociales y de las luchas por la preeminencia. Empero, son dignas de mención algunas otras cosas referidas a la circulación de los objetos valiosos. La primera es que su intercambio no se clasifica fácilmente como intercambio recíproco simple, ajeno al espíritu del negocio y el comercio. Aunque las valuaciones monetarias están ausentes, tanto la naturaleza de los objetos como una variedad de fuentes de flexibilidad del sistema posibilitan el tipo de intercambio calculado que, en mi opinión, se halla en el centro del intercambio mercantil. Estos complejos modos no monetarios de valuación permiten que los socios negocien lo que Firth denomina (de acuerdo con Cassady, 1974) "intercambio por acuerdo privado", donde se llega a algo similar al precio, con base en cierto proceso negociado y no en las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda (Firth, 1983: 91). Así, a pesar de la presencia de tasas convencionales de intercambio, existe un complejo cálculo cualitativo (Campbell, 1983: 245-246), el cual permite la negociación competitiva de estimaciones personales de valor guiada por los intereses. individuales de corto y largo plazo (Firth, 1983: 101). Lo que Firth llama "ingeniería de las obligaciones" es una variedad del tipo de intercambio calculado que, según mi definición, borra la línea divisoria entre intercambio mercantil y otras variedades más sentimentales. La diferencia más importante entre el intercambio de estas mercancías y el intercambio mercantil de las modernas economías industriales reside en que el acrecentamiento perseguido por los sistemas del tipo de la kula es un incremento de prestigio, nombre o fama, donde la forma básica del capital para la generación de este beneficio se halla en la gente y no en otros factores de la producción (Strathern, 1983: 80; Damon, 1983: 339-340). La carencia de precio es un lujo que pocas mercancías pueden permitirse.

Quizá aún más importante que el aspecto de cálculo contenido en el intercambio kula sea el hecho de que los estudios recientes en la materia hacen muy difícil concebir el intercambio de objetos valiosos como un sistema restringido a las fronteras entre las comunidades, según lo cual los intercambios de obsequios ocurrirían dentro de esas comunidades (Damon, 1983: 339). El concepto *kitoum* suministra el vínculo conceptual y técnico entre las grandes rutas recorridas por estos objetos valiosos y los intercambios más íntimos,

regulares y problemáticos efectuados en el interior de la isla (Weiner, 1983; Damon, 1983; Campbell, 1983; Munn, 1983). Aunque el término *kitoum* es complejo y en ciertos aspectos ambiguo, queda claro que representa la articulación entre la kula y otras modalidades de intercambio en donde hombres y mujeres negocian dentro de sus propias comunidades. Los *kitounts* son objetos valiosos que se pueden colocar en la kula o retirar legítimamente de ella, a fin de efectuar "conversiones" (en el sentido de Paul Bohannan) entre niveles dispares de "transmisión" (Bohannan, 1955). En el uso del *kitoum* advertimos los vínculos conceptuales e instrumentales básicos entre las rutas cortas y largas que integran el mundo total del intercambio verificado en Massim. Como lo ha mostrado Annette Weiner, es un error aislar el amplio sistema de intercambio interinsular de las transferencias locales, de objetos, más íntimas pero más asfixiantes, que tienen lugar a causa de deudas, muertes y afinidades (Weiner, 1983: 164-165).

El sistema kula otorga cierto grado de dinamismo y de proceso a las ideas de Mauss sobre la fusión o el intercambio de cualidades entre los hombres y las cosas. Así, Munn (1983: 283) señala, en relación con el intercambio kula en Gawa, lo siguiente: "Aunque los hombres parecen ser los agentes que definen el valor de las conchas, en realidad, sin las conchas, los hombres no podrían definir su propio valor; en este sentido, las conchas y los hombres son mutuamente agentes de la definición del valor del otro". Pero, como también ha destacado Munn, en la construcción recíproca del valor, no solo las rutas desempeñan un papel importante, sino también las desviaciones. La relación entre las rutas y las desviaciones es fundamental en la política del valor del sistema kula, y la orquestación apropiada de tal relación se halla en el núcleo estratégico del sistema:

> En realidad, la desviación está implícita en el sistema de rutas, ya que es uno de los medios para crear nuevos caminos. La existencia de más de una ruta indica también la probabilidad de futuras desviaciones de un camino establecido a otro, en la medida que los hombres queden subordinados a los intereses y las persuasiones de más de un conjunto de socios [...] De hecho, en la kula, los hombres acaudalados deben desarrollar cierta capacidad para equilibrar las operaciones: las desviaciones de una ruta a otra tienen que ser

> sustituidas más tarde, con objeto de aplacar a los socios tramposos y evitar que el camino desaparezca, o de prevenir que ellos mismos sean expulsados de la ruta (Munn, 1983: 301).

Los intercambios a gran escala representan esfuerzos psicológicos para trascender los flujos de cosas más modestos; pero, en el marco de la política del prestigio, las ganancias en las arenas grandes tienen implicaciones en las más pequeñas, y la idea del *kitoum* asegura que tanto las transmisiones como las conversiones sean cuidadosamente administradas para obtener los mayores beneficios posibles en el conjunto de arenas (Damon, 1983: 317-323). La kula puede ser vista como el paradigma de lo que propongo denominar contiendas de valor.[9]

Las contiendas de valor son complejos acontecimientos periódicos que se apartan, de un modo culturalmente bien definido, de las rutinas de la vida económica. La participación en dichas contiendas suele ser tanto un privilegio para aquellos que detentan el poder como un instrumento de competencia de estatus entre ellos. Asimismo, la generalización de las contiendas tiende a separarse o diferenciarse mediante puntos diacríticos culturales bien entendidos. Por último, lo que está en disputa en tales contiendas no solo es el estatus, el rango, la fama o el prestigio de los actores, sino también la disposición de los símbolos fundamentales del valor en la sociedad en cuestión.[10] A pesar de que las contiendas de valor ocurren en lugares y tiempos particulares, sus formas y resultados siempre son importantes para las realidades más mundanas del poder y el valor en la vida cotidiana. Al igual que en el caso de la kula, en las contiendas de valor las habilidades estratégicas se miden culturalmente por medio del éxito con el cual los actores intentan desviarse o de subvertir las rutas convencionalizadas del flujo de cosas.

La idea de contiendas de valor constituye un esfuerzo por crear una categoría general, de acuerdo con una reciente observación de Edmund

9 El uso de Marriott (1968), en un contexto muy distinto, del concepto de contiendas de rango estimuló mi acuñación del término contiendas de valor.

10 En su reciente análisis de las ferias y exposiciones mundiales, Burlan Benedict (1983: 6) destaca los elementos de rivalidad, ostentación competitiva y estatus político, constitutivos de tales eventos.

Leach (1983: 535), quien compara el sistema kula con el mundo moderno del arte en Occidente. El análisis de Baudrillard sobre las subastas de obras de arte verificadas en la actualidad en el mundo occidental nos permite ampliar y refinar esta analogía. Baudrillard advierte que la subasta de arte, en sus aspectos lúdicos, rituales y recíprocos, permanece separada del carácter distintivo del intercambio económico convencional: "Va mucho más allá del cálculo económico e interesa a todos los procesos de transmutación de los valores [...] de una lógica a otra lógica del valor [...] localizables en lugares e instituciones determinados" (1989: 136). El análisis de Baudrillard sobre el carácter de la subasta de obras de arte merece citarse en extenso, puesto que representa una caracterización apropiada de otros ejemplos de contiendas de valor:

> Opuestamente a la operación comercial, que instituye una relación de competencia económica entre particulares sobre un pie de igualdad formal, en la que cada cual lleva su cálculo de apropiación individual, la puja, como la fiesta o el juego, instituye un espacio-tiempo concreto y una comunidad concreta de intercambio entre iguales. Cualquiera que sea el vencedor del reto, la función esencial de la puja es la institución de una comunidad de privilegiados que se definen como tales por la especulación agonística en torno de un corpus restringido de signos. La competición de tipo aristocrático sella su paridad (que no tiene nada que ver con la igualdad formal de la competencia económica), y por tanto su privilegio colectivo de casta por relación a todos los demás, de los cuales los separa no ya su poder de compra, sino el acto colectivo y suntuario de producción y de intercambio de valores/signo (1989: 129).

Al hacer un análisis comparativo de tales contiendas de valor, quizá no sea recomendable seguir la tendencia de Baudrillard a aislarlas analíticamente del intercambio económico mundano, aunque es probable que la articulación de tales arenas de valor con otras arenas económicas resulte muy variable. Más adelante, durante el análisis de la relación entre conocimiento y mercancías, formularé otros comentarios acerca de las contiendas de valor.

En todo caso, la kula representa un sistema altamente complejo de intercalibración de las biografías de las personas y las cosas. Nos muestra la dificultad de separar el intercambio de obsequios y el mercantil incluso en los sistemas preindustriales y no monetarios, y nos recuerda los peligros implícitos en el acto de correlacionar de modo muy rígido las zonas de intimidad social con las distintas formas del intercambio. Sin embargo, quizá de mayor importancia resulta el intrincado ejemplo de la política de las contiendas de valor, donde los actores manipulan las definiciones culturales de ruta y potencial estratégico de desviación.

Con todo, las desviaciones no sólo aparecen como partes de estrategias individuales dentro de las situaciones competitivas, sino que también pueden institucionalizarse de varios modos, los cuales extraen o protegen a los objetos contra los contextos mercantiles socialmente relevantes. Los monopolios de la realeza son quizá los ejemplos más conocidos de tales "mercancías de enclave", como lo señala Kopytoff en el Capítulo II de este libro. Uno de los estudios más interesantes y extensos sobre este tipo de restricción monopólica del flujo mercantil es el de Max Gluckman (1983), ubicado en el contexto de la propiedad real de Lozi, en Rodesia del Norte. Al examinar las categorías de obsequio, tributo y cosas reales, Gluckman muestra cómo incluso en un reino de bajo excedente agrícola el flujo mercantil tuvo implicaciones muy diversas e importantes. En su análisis de las *cosas reales*, queda claro que la función principal de esos monopolios de la realeza era mantener la exclusividad suntuaria (como en el caso de monopolio real de los cepillos de antílope), la ventaja comercial (como en el caso de los colmillos de elefante) y la ostentación de rango. Tales restricciones reales de las cosas con respecto a esferas más promiscuas del intercambio forman parte del modo en que, en las jefaturas y reinos premodernos, la realeza puede asegurar las bases materiales de la exclusividad suntuaria. Este tipo de proceso puede denominarse "desmercantilización desde arriba". No obstante, el caso más complejo concierne a zonas enteras de actividad y producción que se dedican a producir objetos de valor que no pueden ser mercantilizados por nadie. En sociedades de pequeña escala, la esfera del arte y el rito constituye una de tales zonas de enclave donde el espíritu de la mercancía solo interviene en condiciones

de cambio cultural masivo. Para un análisis extenso de este fenómeno, contamos con el ensayo de William Davenport, referido a la producción de objetos destinados al uso ritual en las Islas Salomón Orientales.

Los fenómenos examinados en el ensayo de Davenport iluminan los aspectos mercantiles de la vida social precisamente porque ilustran un tipo de marco moral y cosmológico dentro del cual se restringe la mercantilización. En las prácticas funerarias de esta región, en particular en los *murina* a gran escala, se invierten gran energía y gastos en la fabricación de objetos que desempeñan un papel central en el rito, pero que son escrupulosamente colocados en la categoría de mercancías "terminales" (Kopytoff, capítulo II), a saber, objetos que, debido al contexto, propósito y significado de su producción, efectúan solo un viaje desde la producción hasta el consumo. Después de ello, aunque en ocasiones se utilicen de manera fortuita en asuntos domésticos, nunca reingresan al estado mercantil. Lo que los desmercantiliza es una percepción compleja del valor (en donde se fusiona lo estético, lo ritual y lo social), y una biografía ritual específica. Podemos parafrasear las observaciones de Davenport y destacar que lo que ocurre en el núcleo de un conjunto muy complejo y calculado de inversiones, pagos y créditos es un tipo especial de transvaluación en que se coloca a los objetos más allá de la zona de mercantilización culturalmente delimitada. Esta clase de transvaluación puede adquirir distintas formas en diferentes sociedades, pero es típico que a los objetos que representan una elaboración estética y a los objetos de uso sacro no se les permita, en muchas sociedades, ocupar el estado mercantil durante largo tiempo. En el rígido compromiso de los isleños de Salomón de situar sus productos rituales más estetizados fuera del alcance de la mercantilización, podemos advertir una variación de la tendencia generalizada.

Un ejemplo un tanto diferente de la tensión entre el intercambio de objetos sacros y el mercantil se halla en el análisis que Patrick Geary presenta sobre el comercio de reliquias en Europa durante la Alta Edad Media. Las reliquias descritas son, por supuesto, "encontradas" y no "hechas", y su circulación refleja un aspecto muy importante de la construcción de la identidad comunitaria, el prestigio local y el control eclesiástico en la Europa latina del periodo temprano medieval.

Estas reliquias pertenecen a una economía particular de intercambio y demanda donde la historia vital de cada reliquia es esencial (no accidental) para determinar su valor. Asimismo, la verificación de dicha historia es de gran importancia para establecer su valor. Con base en el enfoque general de la diferencia entre obsequio y mercancía que se ha adoptado en este ensayo, me parece que Geary traza un contraste demasiado marcado entre ambos; de hecho, su propio material muestra que el obsequio, el robo y el comercio eran modos de movimiento de los objetos sacros, en el amplio contexto del control eclesiástico, la competencia local y la rivalidad comunal. Desde esta perspectiva, las reliquias medievales estuvieron en apariencia menos protegidas contra los peligros de la mercantilización que los objetos rituales de Davenport. Con todo, la implicación sigue siendo que los modos comerciales para la adquisición de reliquias eran menos deseables que aquellos del obsequio o el robo, debido no tanto a una antipatía moral directa respecto del comercio de reliquias, sino a que los otros dos modos eran más emblemáticos del valor y la eficacia de los objetos.

Así, las reliquias también pueden clasificarse como objetos cuya fase mercantil es idealmente breve, cuyo movimiento es restringido y a los que en apariencia no se les fija un "precio" igual que se procede con las demás cosas. Con todo, la fuerza de la demanda es tal que circulan a gran velocidad y de una manera muy similar a sus contrapartes mundanas. En consecuencia, aun en el caso de los objetos "transvaluados", que adoptan las características de las mercancías de enclave y no de las móviles, existe una considerable variación en la motivación y la naturaleza de su enclave. Los "objetos reales" de Gluckman, las reliquias de Geary y los objetos rituales de Davenport son distintos tipos de mercancías de enclave, objetos cuyo potencial mercantil se limita con todo cuidado. Cabe mencionar también que un modo institucional muy importante de restricción de la zona misma del intercambio mercantil es el "puerto de comercio" asociado a muchos reinos premodernos (Geertz, 1980), aunque tales limitaciones impuestas al comercio por la política premoderna pudieron haber sido menos extensas de lo que se ha imaginado en ocasiones (Curtin, 1984, p. 58). Las razones de dicha restricción son muy variables, pero, en cada caso, las bases morales de la limitación tienen claras implicaciones en

la estructuración y facilitación de los intercambios políticos, sociales y comerciales de tipo más mundano. Dichas mercancías de enclave se parecen a otra clase de cosas, analizadas con frecuencia en la bibliografía antropológica como "objetos primitivos valiosos", cuya particularidad se vincula de forma directa con el intercambio mercantil.

Aunque, en virtud de su destino de intercambiabilidad y su mutua conmensurabilidad, las mercancías tienden a disolver los lazos entre las personas y las cosas, dicha tendencia siempre está balanceada por la contratendencia, existente en toda sociedad, a restringir, controlar y canalizar el intercambio. En muchas economías primitivas, los objetos valiosos exhiben estas cualidades socialmente restringidas. Debemos a Mary Douglas (1967) la idea de que muchos de tales objetos se parecen a los cupones y licencias de las economías industriales modernas. Es decir, aunque parezcan dinero, no son el medio generalizado de cambio, sino que tienen las características siguientes: a) los poderes de adquisición que representan son muy específicos; b) su distribución es controlada de diversas maneras; e) las condiciones que rigen su emisión crean un conjunto de relaciones patrón-cliente; d) su función principal es proporcionar la condición necesaria para alcanzar posiciones de alto estatus, para mantener el rango o para combinar acometidas al estatus, y e) los sistemas sociales donde funcionan dichos cupones y licencias están adaptadas para la eliminación o reducción de la competencia, con objeto de mantener un patrón fijo de estatus (Douglas, 1967: 69). La ropa de rafia en África Central, las cuentas cilíndricas de concha utilizadas por los indios del este de Estados Unidos, las conchas usadas como dinero entre los yuroks, y las conchas empleadas como moneda en la isla Rossell y otras partes de Oceanía, son ejemplos de tales "cupones mercantiles" (de acuerdo con la terminología de Douglas); cuyo flujo restringido se pone al servicio de la reproducción de los sistemas sociales y políticos. Las cosas, en tales contextos, permanecen como mecanismos para la reproducción de las relaciones interpersonales (cf. Dumont, 1980: 231). Dichos cupones mercantiles representan un punto intermedio de transformación entre los obsequios "puros" y el comercio "puro". Comparten con el obsequio cierta insensibilidad con respecto a la oferta y la demanda, una alta codificación en términos de etiqueta e idoneidad, y una tendencia a seguir las rutas

socialmente establecidas. Con el trueque, su intercambio comparte el espíritu de cálculo, una franqueza en relación con el interés personal, y una preferencia por las transacciones con ciertos extraños.

En estos sistemas restringidos de flujo mercantil, donde los objetos valiosos desempeñan el papel de cupones destinados a proteger los sistemas de estatus, hallamos el equivalente funcional pero la inversión técnica de "la moda" en las sociedades más complejas. Mientras que, en el primer caso, los sistemas de estatus están protegidos y son reproducidos mediante la restricción de las equivalencias y el intercambio dentro de un universo estable de mercancías, lo que se limita y controla en el sistema de la moda es el gusto dentro de un universo siempre cambiante de mercancías que crea la ilusión de la intercambiabilidad completa y del acceso irrestricto. Las leyes suntuarias constituyen un mecanismo intermedio de regulación del consumo, digno de las sociedades consagradas a la ostentación de estatus estables que desacreditan a los contextos mercantiles, tales como India, China y Europa, durante el periodo premoderno. (Estas comparaciones serán precisadas en un punto posterior de este ensayo).[11]

Tales formas de restricción y las mercancías de enclave por ellas creadas suministran en ocasiones el contexto y los objetivos de las estrategias de desviación. Es decir, la desviación a veces involucra el traslado calculado e "interesado" de cosas desde una zona de enclave hasta otra donde el intercambio sea menos limitado y más redituable a corto plazo. Mientras que el enclave suele ser de interés para los grupos, en particular para los grupos políticos y económicos poderosos de una sociedad, la desviación es a menudo el recurso del empresario individual. Empero, ya sea que se trate de grupos o individuos involucrados en cualquier tipo de actividad, la oposición fundamental reside en que el enclave busca proteger ciertas cosas en contra de la mercantilización, mientras que la desviación aspira con frecuencia a arrastrar las cosas protegidas a la zona de mercantilización. Sin embargo, las desviaciones también pueden adoptar la forma de cambios estratégicos de ruta dentro de una zona de mercantilización.

11 Simmel (1957) presenta un original estudio de la lógica cultural de la moda. Véase también la referencia al análisis de Bouglé, referido a los patrones de consumo en las aldeas-hindúes, que aparece en el ensayo de Christopher Bayly, incluido en este volumen, y Max Weber (1978).

En un estudio extremadamente interesante del comercio británico realizado en Hawai, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, Marshall Sahlins muestra cómo los jefes hawaianos, al extender las concepciones tradicionales del tabú para cubrir nuevas clases de bienes comerciales (en concordancia con sus propios intereses cosmopolitas), tuvieron éxito en la transformación de la "finalidad divina", incluso de los tabúes económicos, en instrumentos de utilidad momentánea (Sahlins, 1981: 44-45). Así, lo que Sahlins denomina "la pragmática del comercio" erosiona y transforma los límites culturales dentro de los cuales se le concibió en un inicio. En síntesis, la política del enclave, lejos de ser una garantía de la estabilidad sistemática, puede constituir el caballo de Troya del cambio.

La desviación de las mercancías de sus rutas específicas siempre es un signo de creatividad o crisis, ya sea estética o económica. Estas crisis pueden adoptar distintas formas: la penuria económica, en todos los tipos de sociedades, lleva a las familias a desprenderse de bienes heredados, antigüedades y recuerdos, para mercantilizarlos. Esto es válido tanto para los objetos valiosos de la kula como para los objetos valiosos más modernos. La otra forma de crisis en que las mercancías se desvían de sus propias rutas es, por supuesto, la guerra y el saqueo que históricamente la ha acompañado. En este saqueo y el despojo así generado vemos el caso opuesto al comercio. En la guerra, la transferencia de mercancías siempre tiene una intensidad simbólica especial, ejemplificada en la tendencia a enmarcar la exploración más mundana en el traspaso de armas, insignias o partes de los cuerpos pertenecientes al enemigo. En el saqueo prestigioso que delimita el pillaje más mundano, advertimos la analogía hostil de la superposición dual de circuitos de intercambio mundanos y más personalizados en otros contextos (como los de la kula y el *gimwali* en Melanesia). El robo, condenado en la mayoría de las sociedades humanas, es la forma más modesta de desviación de mercancías de sus rutas preestablecidas.

Empero, existen ejemplos más sutiles de desviación de las mercancías de sus rutas acostumbradas. Toda un área involucra lo que ha sido llamado arte turístico, donde los objetos producidos por comunidades pequeñas con fines estéticos, ceremoniales o suntuarios son transformados cultural, económica y socialmente por los gustos, los mercados y las ideologías de

economías más grandes (Graburn, 1976). Agregaré otras observaciones sobre el arte turístico en la sección de este ensayo referida al conocimiento y las mercancías. Otra área relacionada es aquella de la historia y la naturaleza de las colecciones artísticas y arqueológicas del mundo occidental cuya formación representa mezclas extremadamente complejas de saqueo, venta y herencia, combinadas con el gusto occidental por las cosas del pasado y de los otros.[12] En este tráfico de artefactos, podemos encontrar hoy la mayoría de los aspectos culturales básicos del flujo internacional de mercancías "auténticas" (cf. Spooner, Capítulo VII) y "singulares" (cf. Kopytoff, Capítulo II). Las controversias actuales entre los museos ingleses y estadunidenses y los Gobiernos de varios países plantean todas las sutilezas morales y políticas que están en juego cuando las cosas son desviadas de sus rutas mínimas y convencionales, siendo transferidas mediante tal diversidad de modos que se vuelve muy difícil juzgar su historia de reclamos y contra reclamos.

La desviación de las mercancías de sus rutas acostumbradas conlleva siempre un aura riesgosa y moralmente ambigua. Cada vez que, lo que Bohannan (1955) llama transmisiones, cede ante lo que denominó conversiones, el espíritu de empresa y el de corrupción moral entran a un tiempo en escena. En el caso de los intercambios kula de Melanesia, el movimiento de las mercancías a través de las esferas, aunque un tanto fuera de orden, reside también en el centro de la estrategia del hábil y exitoso participante kula. Las conversiones inapropiadas de una esfera de intercambio a otra son fortalecidas con frecuencia por el recurso de la excusa de crisis económica, sea el hambre o la bancarrota. Si tales excusas no son asequibles o creíbles, es probable que aparezcan acusaciones referidas a motivos inapropiados o venales. Ejemplos excelentes de las implicaciones políticas de la desviación pueden encontrarse en el campo de los intercambios mercantiles ilegales o casi legales, un caso que se analiza a continuación.

El interesante ensayo de Lee Cassanelli incluido en este volumen examina el cambio, verificado durante los últimos cincuenta años en el noreste

12 Un excelente ejemplo de este proceso aparece en Hencken (1981).

de África, de la economía política de la mercancía casi legal llamada *qat* (*catha edulis*). El *qat* proporciona un excelente ejemplo del cambio experimentado por lo que puede llamarse ecúmene mercantil,[13] es decir, una red transcultural de relaciones que vincula a productores, distribuidores y consumidores de una mercancía particular o de un grupo de mercancías. Lo que resulta en particular interesante de este caso es la dramática expansión de la escala del consumo (y de la producción) del *qat*, la cual está claramente vinculada a cambios en la infraestructura técnica y en la economía política de la región. Aunque la expansión de la producción parece consistente con las condiciones requeridas por patrones más universales de comercialización de la agricultura, destaca la expansión de la demanda y la respuesta estatal —especialmente en Somalia— ante la explosión tanto de la producción como del consumo del *qat*.

La prohibición (1983) impuesta por el Gobierno somalí contra la plantación, importación y mascadura del *qat* representa claramente la decisión más novedosa de una larga tradición de ambivalencia estatal ante una mercancía cuyo consumo se percibe como vinculado a formas de sociabilidad improductivas y subversivas en potencia. En el caso de la prohibición somalí, parece que el *qat* (como la ropa en la retórica de Ghandi) es considerado un problema de muchos niveles, que desafía no solo el control estatal de la economía, sino también la autoridad estatal sobre la organización social del tiempo libre de los nuevos ricos y los ciudadanos en ascenso de la población urbana de Somalia. Con base en este ejemplo, podemos recordar que cuando los cambios rápidos en la esfera del consumo no son inspirados y regulados por los detentadores del poder, parecen amenazar a estos. Asimismo, en el caso de Somalia, hallamos un muy buen ejemplo de la tensión existente entre un cambio rápido en la economía política de un ecúmene mercantil regional y la autoridad de un estado sobre ese ecúmene.

Desde luego, los mejores ejemplos de desviaciones de mercancías de sus nexos originales pueden encontrarse en los campos de la moda, la

13 Mi uso del término *ecúmene* es una modificación un tanto idiosincrásica de la utilización que Marshall Hodgson hace de ese término en *The venture of Islam* (1974)

ostentación doméstica y la colección en el Occidente moderno. De acuerdo con la apariencia de alta tecnología inspirada por Bauhaus, la funcionalidad de fábricas, almacenes y oficinas se desvía a la estética de los hogares. Los uniformes de diversas ocupaciones se convierten en un vocabulario de la vestimenta. Según la lógica del arte descubierto, se enmarca y estetiza la mercancía diaria. Todos estos son ejemplos de lo que podemos llamar mercantilización por desviación, donde el valor, en el mercado del arte o de la moda, es acelerado o incrementado al colocar objetos y cosas en contextos inverosímiles. La estética de la descontextualización (impulsada por la búsqueda de la novedad) se halla en el núcleo de la ostentación, en las casas de los intelectuales de Occidente, de herramientas y artefactos de los "otros": la alforja turca, la lanza masai, la canasta dinka.[14] En estos objetos no solo advertimos la equiparación de lo auténtico con el objeto exótico cotidiano, sino también la estética de la desviación. Tal desviación no solo constituye un instrumento de desmercantilización del objeto, sino también de intensificación (potencial) de la mercantilización mediante el incremento del valor concomitante a su desviación. Este incremento del valor, por medio de la desviación de las mercancías de sus circuitos acostumbrados, subyace al saqueo de objetos valiosos del enemigo en tiempos de guerra, a la compra y ostentación de objetos "primitivos" utilitarios, a la enmarcación de los objetos "encontrados" y a la formación de colecciones de cualquier tipo.[15] En todos estos ejemplos, las desviaciones de las cosas combinan el impulso estético, el vínculo empresarial y el contacto con lo moralmente ofensivo.

No obstante, las desviaciones son sólo significativas en relación con las rutas respecto de las cuales se apartan. De hecho, al observar la vida social de las mercancías en cualquier sociedad o periodo dado, parte del desafío antropológico es definir a trayectorias relevantes y habituales,

14 Compárese esto con la noción de Alsop (1981) referida a que la colección de arte invariablemente "arranca" las cosas coleccionables de sus contextos originarios de uso y las despoja de su propósito social significante.

15 Vale la pena destacar que, a pesar de su oposición superficial, existe una profunda afinidad entre comercio y arte, al menos desde el punto de vista de la vida material de las sociedades más simples. Ambos involucran lo que puede llamarse la intensificación de la objetivación, aunque de distintas maneras. El arte turístico se basa en esta cercana afinidad.

de modo que la lógica de las desviaciones pueda entenderse de forma adecuada y correlativa. La vinculación entre rutas y desviaciones es en sí misma histórica y dialéctica, como Michael Thompson (1979)[16] lo ha mostrado hábilmente con respecto a los objetos artísticos del Occidente moderno. Las desviaciones que se vuelven predecibles están en camino de formar nuevas rutas, las cuales inspirarán, a su vez, otras desviaciones o regresos a las antiguas trayectorias. Estas relaciones históricas son rápidas y fáciles de advertir en nuestra propia sociedad, pero menos visibles en las sociedades donde tales cambios son más graduales.

El cambio en la construcción cultural de las mercancías puede buscarse en la variante relación entre rutas y desviaciones a lo largo de la vida de las mercancías. La desviación de las mercancías de sus rutas acostumbradas da lugar a otras trayectorias, pero la desviación se da con frecuencia en función de deseos irregulares y demandas nuevas, motivo por el cual tenemos que considerar el problema del deseo y la demanda.

Deseo y demanda

Parte de la causa por la cual la demanda permanece en términos generales como un misterio reside en que suponemos que tiene algo que ver con, por una parte, el deseo (cuya naturaleza parece ser infinita y transcultural) y, por la otra, la necesidad (cuya naturaleza parece ser fija). De acuerdo con Baudrillard (1989), propongo que abordemos la demanda y, por tanto, el consumo como un aspecto de la economía política total de las sociedades. Es decir, la demanda surge como una función de la diversidad de prácticas y clasificaciones sociales, en lugar de como una emanación misteriosa de las necesidades humanas; una respuesta mecánica a la manipulación social (el caso del modelo de los efectos de la publicidad sobre nuestra propia sociedad), o una reducción del deseo universal y voraz por los objetos o por cualquier cosa asequible.

16 N. de T.: Se observa una discrepancia en el original: la fecha de la cita en el texto no coincide con la consignada en la lista de referencias. Se ha respetado la cifra del documento fuente, advirtiendo al lector sobre esta inconsistencia de origen.

La maravillosa descripción de Alfred Gell, contenida en el capítulo acerca de los dilemas del consumo entre los muria gondos de la India Central señala muchos puntos interesantes e importantes sobre las complejidades culturales del consumo y las disyuntivas del deseo en sociedades a pequeña escala que experimentan un cambio rápido. Después de leer el ensayo en cuestión, es difícil considerar el deseo por los bienes como algo insondable o independiente de la cultura, y la demanda como una respuesta natural y mecánica a la disponibilidad de bienes y al dinero para comprarlos. El consumo entre los gondos se vincula de forma estrecha a la ostentación colectiva, al igualitarismo económico y a la sociabilidad. Esto plantea un problema para aquellos *muria* que, como resultado de los cambios de la economía tribal durante el último siglo, han adquirido mucho mayor riqueza que el resto de sus comunidades. La consecuencia es un patrón de lo que, invirtiendo a Veblen, podemos llamar "mezquindad conspicua", donde se sostiene la sencillez en el estilo de vida y las posesiones, a pesar de las crecientes presiones de un ingreso en ascenso. Cuando se gasta en mercancías, estas tienden a girar alrededor de formas mercantiles tradicionalmente aceptables, como envases de latón, atavíos ceremoniales y casas, donde se encarnan los valores colectivos comunes. Este no es un mundo dominado por el espíritu de los bienes limitados, como parecería a primera vista, sino uno donde no existe un interés real en la mayor parte de las cosas ofrecidas por el mercado. La identidad grupal, la homogeneidad suntuaria, la igualdad económica y la sociabilidad hedonista constituyen una estructura de valor dentro de la cual los bienes introducidos más externamente no generan interés o preocupación. Aquí, la regulación colectiva de la demanda (y, por tanto, del consumo) forma parte de una estrategia consciente por parte de los ricos para contener las implicaciones potencialmente divisorias de la diferenciación. Esto representa un ejemplo sorprendente de regulación social del deseo de bienes, a pesar de que se hayan alcanzado las condiciones técnicas y logísticas para una revolución del consumo, como es el caso de la ropa en la India, el cual examinaremos a continuación.

La contribución de Christopher Bayly a este volumen consiste en un análisis enormemente agudo y sugerente del cambio en la moral y la economía

política de las prendas de vestir en la India, ocurrido desde 1700.[17] Demuestra con claridad los vínculos existentes entre la política, el valor y la demanda en la historia social de las cosas. Según la argumentación de Bayly, la producción, el intercambio y el consumo de ropa constituyen el material de un "discurso político" (como el *qat* lo es en Somalia) que une la demanda imperial, las estructuras de producción y las solidaridades sociales en el plano local, y la red de legitimidad política. En este discurso político, la esfera del consumo explica la profunda penetración de los textiles ingleses en los mercados indios durante el siglo xix, y no solo la lógica de la utilidad y el precio. Por último, en el movimiento nacionalista de fines del siglo xix y principios del XX, particularmente en la retórica de Gandhi, las muchas ramificaciones del discurso político sobre las prendas de vestir son reconstituidas y vueltas a desarrollar en lo que puede llamarse un lenguaje de resistencia mercantil, donde los significados más antiguos y más recientes de la vestimenta se revierten contra el imperio británico. El ensayo de Bayly (el cual constituye, entre otras cosas, una explicación extraordinariamente rica de las ideas de Werner Sombart), al adoptar una perspectiva de largo alcance con respecto a la vida social de una mercancía de particular importancia, nos ofrece dos ideas de gran interés comparativo: en primer lugar, que la lógica del consumo acostumbrado en comunidades pequeñas se liga de manera íntima a regímenes de valor más amplios, definidos por políticas a gran escala. En segundo, que el vínculo entre los procesos de "singularización" y "mercantilización" (de acuerdo con los términos de Kopytoff) en la vida social de las cosas es en sí mismo dialéctico y se sujeta (en las manos de hombres como Gandhi) a lo que Clifford Geertz denomina juego profundo.

La demanda es entonces la expresión económica de la lógica política del consumo y, por tanto, su fundamento debe buscarse en esta lógica. Apoyándome en Veblen, Douglas e Isherwood (1981)[18], y en Baudrillard (1969; 1980; 1989), sostengo que el consumo es eminentemente social,

17 Para una descripción fascinante del papel desempeñado por las prendas de vestir en una sociología colonial del conocimiento de la India, véase Cohn (1996).

18 N. de T.: Existe una discrepancia de autoría entre la cita en el texto y la fuente consignada en la bibliografía original. Se advierte al lector sobre esta inconsistencia técnica proveniente del material de origen.

correlativo y activo, en lugar de privado, atomizado y pasivo. Al respecto, Douglas aventaja a Baudrillard porque no restringe su noción de consumo a la sociedad capitalista contemporánea, sino que también la extiende a otras sociedades. Baudrillard, por su parte, coloca la lógica del consumo bajo el dominio de las lógicas sociales tanto de la producción como del intercambio. Además, Baudrillard plantea una crítica inmensamente persuasiva de Marx y de sus colegas, los economistas políticos, en relación con los conceptos gemelos de necesidad y utilidad, los cuales se conciben en la perspectiva marxiana como arraigados a un sustrato primitivo, universal y natural de requerimientos humanos básicos.

Mi propuesta consiste en llevar más adelante la crítica de Baudrillard a la "necesidad" y la "utilidad" (y la reubicación que este autor efectúa de ambos términos, en la esfera más amplia de la producción y el intercambio), y extender esta idea a las sociedades no capitalistas. ¿Qué implica esta perspectiva del consumo? Significa considerar el consumo (y la demanda que lo hace posible) como un punto central no solo para enviar mensajes sociales (tal como lo ha propuesto Douglas), sino también para recibirlos. La demanda esconde así dos relaciones diferentes entre el consumo y la producción: por una parte, la demanda está determinada por fuerzas sociales y económicas y, por la otra, la demanda puede manipular, dentro de ciertos límites, estas fuerzas sociales y económicas. La cuestión importante es que, desde una perspectiva histórica, ambos aspectos de la demanda pueden influirse de forma mutua. Tomemos, por ejemplo, la demanda imperial, tal como aparece en el análisis de Bayly sobre la India premoderna. Aquí, desde el punto de vista interno de la sociedad india del siglo XVIII, la demanda imperial es una fuerza emisora de mensajes y forjadora de la producción. Es decir, la demanda imperial establece los parámetros tanto para el gusto como para la producción, dentro de su esfera relevante de influencia. Sin embargo, también es una fuerza receptora de mensajes, como se confirma en su relación con los estilos y productos europeos contemporáneos. En general, los gustos de la elite tienen esta función de "embudo", al seleccionar entre posibilidades exógenas, y suministrar modelos y controles políticos directos, para los gustos y la producción internos.

Un mecanismo que con frecuencia traduce el control político a la demanda del consumidor es aquel de las "leyes suntuarias", característico de las complejas sociedades premodernas, pero también de las sociedades a pequeña escala, preindustriales y prealfabetizadas. Donde quiera que el vestido, la comida, la vivienda, la ornamentación corporal, el número de esposas o esclavos, o cualquier otro acto visible de consumo se sujeten a la regulación externa, podemos observar que la demanda se supedita a la definición y el control sociales. Desde esta perspectiva, la plétora de "tabúes" en las sociedades primitivas, que prohíben tipos particulares de matrimonio, de consumo de alimentos y de interacción (así como sus correspondientes preceptos positivos), pueden considerarse estrictas analogías morales de las leyes más explícitas, legalizadas y suntuarias de las sociedades más complejas y alfabetizadas. Con base en este vínculo, podemos entender la esclarecedora analogía trazada por Douglas (1967) entre sistemas de racionamiento "primitivos" y "modernos".

Lo que es el dinero moderno para los medios primitivos de cambio, lo es la moda para las regulaciones suntuarias primitivas. Existen claras similitudes morfológicas entre ambos, pero el término *moda* sugiere gran velocidad, rápida rotación, ilusión de acceso total y alta convertibilidad, y presuposición de una democracia de consumidores y de objetos de consumo. Por su parte, los medios primitivos de cambio, como las leyes suntuarias y los tabúes, parecen rígidos, de movimiento lento, débiles en su capacidad de conmensurabilidad y vinculados a la jerarquía, la discriminación y el rango en la vida social. Sin embargo, como Baudrillard (1989) y Bourdieu (1984) lo han demostrado de modo tan acertado, los *establishments* que controlan la moda y el buen gusto en el Occidente contemporáneo no son menos eficaces en limitar la movilidad social, señalar el rango y la discriminación sociales, y colocar a los consumidores en un juego cuyas reglas siempre cambiantes están determinadas por los "hacedores del gusto" y sus colegas expertos, que quienes habitan en la cima de la sociedad.

Los consumidores modernos son víctimas de la velocidad de la moda, del mismo modo en que los consumidores primitivos son víctimas de la estabilidad de la ley suntuaria. La demanda de mercancías está regulada

básicamente por esta diversidad de mecanismos hacedores del gusto, cuyo origen social se entiende con mayor claridad (tanto por parte de los consumidores como de los analistas) en nuestra sociedad que en aquellas distantes a la nuestra. Desde la perspectiva de la demanda, la diferencia fundamental entre las sociedades modernas y capitalistas y aquellas basadas en formas más simples de la tecnología y el trabajo no reside en que nosotros tengamos una economía mercantilizada por completo y ellos una donde la subsistencia es dominante y el intercambio económico limitado, sino en que las demandas de consumo de los individuos de nuestra sociedad están reguladas por criterios ampliamente variables de "lo apropiado" (la moda), en oposición a los cambios menos frecuentes en los sistemas suntuarios o tradicionales más directamente regulados. Sin embargo, en ambos casos, la demanda es un impulso regulado y generado por la sociedad, y no un artefacto de los caprichos o las necesidades individuales.

Desde luego, incluso en las sociedades modernas y capitalistas, los medios publicitarios y el impulso a la imitación (en el sentido conferido por Veblen) no son los únicos motores de la demanda del consumidor. La demanda puede manipularse mediante instancias políticas directas, ya sea en la forma particular del recurso al boicot del cultivo de la lechuga basado en condiciones laborales deficientes, o en las formas generalizadas del proteccionismo "oficial" o "no oficial". De nuevo, el enfoque de Bayly sobre la manipulación efectuada por Gandhi del significado de la ropa producida en la localidad constituye un ejemplo de primer orden de la politización directa de la demanda. Con todo, esta manipulación a gran escala de la demanda de prendas de vestir en la India del siglo XX sólo fue posible debido a que la ropa había sido durante mucho tiempo, en el plano local, un instrumento para el envío de mensajes sociales finalmente sintonizados. De este modo, podemos decir que, como regla general, aquellas mercancías cuyo consumo se relaciona de manera más intrincada con los mensajes sociales básicos suelen ser menos sensibles a los cambios bruscos en la oferta o el precio, pero más sensibles a la manipulación política a escala social.

Desde el punto de vista social, y en el transcurso de la historia humana, los agentes decisivos para la articulación de la oferta y la demanda de mercancías han sido no solo los gobernantes, sino también, por supuesto,

los comerciantes. El reciente trabajo monumental de Philip Curtin sobre el comercio intercultural en el mundo preindustrial postula que los modelos tempranos de comercio administrado, como el de Polanyi, pueden haber exagerado el control estatal sobre las complejas economías premodernas (Curtin, 1984: 58). Lo que queda claro es que las relaciones entre los gobernantes y los Estados han variado enormemente a lo largo del tiempo y el espacio. Aunque estudios como el de Curtin están empezando a mostrar los patrones que subyacen a esta diversidad, el componente de la demanda en estas dinámicas de comercio permanece oscuro. Los vínculos históricos muy estrechos entre los gobernantes y los comerciantes (ya sea de complicidad o antagonismo) pueden derivarse de modo parcial de que ambas partes han exigido el desempeño del papel central en la regulación social de la demanda. La política de la demanda descansa a menudo en la raíz de la tensión entre los mercaderes y las elites políticas; mientras que aquellos tienden a ser los representantes sociales de la equivalencia redimida, las mercancías nuevas y los gustos extraños, estas tienden a ser los guardianes del intercambio restringido, los sistemas mercantiles fijos, y los gustos establecidos y las costumbres suntuarias. Este antagonismo entre bienes "externos" y estructuras locales suntuarias (y, por tanto, políticas) quizá sea la razón fundamental de la tendencia, en ocasiones marcada, de las sociedades primitivas a restringir el comercio a un conjunto limitado de mercancías y a tratos con extraños en lugar de con parientes o amigos. En las sociedades complejas, la noción de que el comercio viola el espíritu del obsequio puede ser solo un subproducto correlativo de este antagonismo más fundamental. En consecuencia, en las sociedades premodernas, la demanda de mercancías refleja a veces las dinámicas en el plano estatal o, como en el caso de la kula, la función esencial de la competencia de estatus entre los miembros de la elite, al vincular los sistemas interno y externo de intercambio.

Este puede ser un punto adecuado para destacar que existen diferencias importantes entre la biografía cultural y la historia social de las cosas. Las distinciones tienen que ver con dos tipos de temporalidad, dos formas de identidad de clase y dos niveles de la escala social. El enfoque de la biografía cultural, formulado por Kopytoff, es característico de cosas específicas, que

se mueven a través de diferentes manos, contextos y usos, acumulando así una biografía particular o un conjunto de biografías. Sin embargo, cuando observamos clases o tipos de cosas, es importante considerar cambios a largo plazo (con frecuencia de la demanda) y dinámicas a gran escala, que trascienden las biografías de los miembros particulares de esas clases o tipos. Así, una reliquia particular puede tener una biografía específica, pero todos los tipos de reliquias y, de hecho, la clase de cosas llamadas "reliquias", pueden tener un flujo y reflujo histórico más amplio, en el curso del cual su significado puede cambiar de un modo notable.

El ensayo de Colin Renfrew, reproducido en el capítulo V de este libro, formula una serie de importantes preguntas metodológicas y teóricas acerca de las mercancías vistas a largo plazo. Su ensayo destaca que las mercancías han tenido gran importancia en algunos cambios muy tempranos y fundamentales de la vida social humana, en específico en la transformación de las sociedades relativamente indiferenciadas de cazadores y recolectores en sociedades estatales tempranas más complejas. En primer lugar, el considerar a largo plazo estos procesos significa necesariamente hallarnos envueltos en modelos inferenciales que vinculan producción y consumo. En segundo, el examinar los procesos productivos en la historia humana temprana implica advertir el cambio tecnológico. Aquí, Renfrew nos muestra de forma muy persuasiva que los factores decisivos de la innovación tecnológica (la cual es esencial para el desarrollo de nuevas mercancías) son con frecuencia sociales y políticos, y no meramente técnicos. Una vez admitido esto, se desprende, de acuerdo con Renfrew, que las consideraciones del valor y la demanda son esenciales para comprender lo que parecen ser, a primera vista, estrictos saltos tecnológicos.

Así, al analizar el papel desempeñado por el oro y el cobre en Varna, y el de objetos similares de "valor principal" en otras situaciones prehistóricas europeas, Renfrew nos aleja de una perspectiva de reflejo (donde los objetos valiosos sólo reflejan el alto estatus de la gente que los usa), para llevarnos a un enfoque de interpretación dinámica, donde el uso de objetos de alta tecnología es fundamental para los cambios en la estructura de estatus. La cuestión por explicar está constituida por las nociones cambiantes de valor que, a su vez, implican nuevos usos de los descubrimientos tecnológicos y nuevas formas

de control político de los productos de tales innovaciones. La compleja argumentación de Renfrew ilustra el planteamiento de que los cambios en el papel social desempeñado por los objetos de ostentación (basados en el control sobre los materiales de valor principal) iluminan las modificaciones a largo plazo en el valor y la demanda. Al mismo tiempo, su ensayo nos recuerda que el papel cultural, de las mercancías no puede divorciarse en última instancia de la tecnología, la producción y el comercio. Con todo, aunque el problema arqueológico sirve para destacar la complejidad y la profundidad histórica de la relación entre valores, diferenciación social y cambio tecnológico, la ausencia de documentos escritos u orales convencionales dificulta más la reconstrucción del cambio del valor que la reconstrucción del cambio social o técnico. El ensayo de Renfrew tiene la virtud de ir contra la naturaleza de lo que su evidencia apoya más cómodamente.

Los procesos a largo plazo que involucran el papel social de las mercancías han sido estudiados recientemente en tres tratados importantes, dos de ellos elaborados por historiadores (Braudel, 1984; Curtin, 1984), y el otro por un antropólogo (Wolf, 1982). Cada una de estas obras posee ciertas virtudes distintivas, pero también existen algunas superposiciones significativas entre ellas. El libro de Curtin es un examen audaz y comparativo de lo que él llama "diásporas comerciales", comunidades de comerciantes que traficaban mercancías a través de las fronteras culturales, a lo largo de la historia registrada y hasta la era de la expansión industrial europea. Se esfuerza por mantener una perspectiva no eurocéntrica del mundo del comercio anterior al periodo industrial, y en esto tiene mucho en común con los objetivos perseguidos por Eric Wolf. Con todo, el trabajo de Wolf, en parte debido a la perspectiva teórica del autor y en parte a su preocupación por un capítulo más reciente en la historia de los vínculos europeos con el resto del mundo, está mucho más orientado a Europa. Los hallazgos de Curtin y Wolf refutan en gran medida la idea de los flujos mercantiles como fenómenos relacionados, ya sea reciente o exclusivamente, con el capitalismo de la metrópoli, y llaman la atención sobre los marcos institucionales, logísticos y políticos que han contextuado al comercio a través de las fronteras sociales y culturales. Empero, por distintas razones en cada caso, a Curtin y Wolf les interesa menos la cuestión de la demanda y el problema correlativo de la interpretación cultural del valor.

Los ensayos incluidos en el presente volumen complementan y enriquecen el extenso panorama institucional, tecnológico y económico de los flujos mercantiles contenido en esos dos estudios.

Braudel, el formidable decano de la escuela de los *Annales*, es un caso aparte. En el segundo volumen de su magistral estudio del capitalismo y la vida material, que abarca del año 1500 al 1800 d.C., Braudel no se contenta con brindarnos una descripción apretada y dramática de la creación del mundo industrial moderno. En este volumen, cuyo título es *Los juegos del intercambio*, Braudel se ocupa, como lo hacen Curtin y Wolf (junto con, por supuesto, muchos historiadores económicos y sociales), de la naturaleza, estructura y dinámica del comercio mundial, a partir del siglo xvi. De hecho, en su conjunto, estas tres obras presentan una sorprendente imagen del conjunto extremadamente complejo e interrelacionado que he denominado "ecúmenes mercantiles", las cuales, desde aproximadamente el año 1500 d.C., vinculan a partes muy diversas del mundo. Braudel analiza de forma breve la esfera de la demanda dentro de este gran diseño. Su argumentación acerca de la relación entre la oferta y la demanda en el mundo capitalista temprano (Braudel, 1984) establece el asunto en su perspectiva temporal; pero, en relación con las fuentes y las consecuencias de los cambios en la demanda, añade muy poco a lo anticipado por Werner Sombart, a quien nos referiremos más adelante. No obstante, estos tres importantes enfoques sobre el flujo mercantil en la construcción del sistema mundial resaltan y suministran un contexto para los ensayos incluidos en este volumen, cuyo objetivo es esclarecer las dinámicas sociales y culturales del flujo de mercancías. Esta inclinación hacia cuestiones de valor, trayectoria y clasificación pretende enriquecer nuestra percepción de la idiosincrasia de las cosas, dimensión a la cual la academia no ha prestado una gran atención sistemática.

La historia social de las cosas y su biografía cultural no son asuntos separados por completo, ya que la historia social de las cosas, a lo largo de períodos prolongados y en amplios niveles sociales, ha limitado la forma, el significado y la estructura de las trayectorias a corto plazo, específicas e íntimas. También ocurre, aunque suele ser más difícil de documentar y predecir, que muchos cambios pequeños en la biografía cultural de las

cosas puedan, con el paso del tiempo, conducir a cambios en la historia social de las cosas. Los ejemplos de estas relaciones complejas entre las trayectorias de corto y largo plazo y entre los patrones de corto y largo alcance del movimiento de las cosas no abundan en la bibliografía de la materia, pero podemos comenzar advirtiendo estas relaciones con respecto a las transformaciones de los sistemas de intercambio bajo el impacto de la dominación colonial (Dalton, 1978: 155-165; Strathern, 1983), y a las transformaciones de la sociedad occidental que han llevado al surgimiento de los objetos de recuerdo y de colección (Stewart, 1984). En este volumen, los ensayos de Bayly, Geary, Cassanclli y Reddy constituyen reflexiones en particular interesantes sobre la relación entre estas dos dimensiones de temporalidad de las cosas. No es coincidencia que estos estudiosos sean historiadores sociales preocupados por los procesos a largo plazo. El mejor tratamiento general de la relación entre la demanda, la circulación de objetos valiosos y los cambios a largo plazo en la producción mercantil aparece en el trabajo de Werner Sombart (Sombart, 1979).

A Sombart le debemos la importante noción histórica de que en el periodo europeo comprendido entre los años 1300 y 1800, el cual considera como el nexo del capitalismo temprano, la causa principal de la expansión del comercio, la industria y el capital financiero fue la demanda de bienes de lujo, sobre todo de parte de los *nouveaux riches*, las cortes y la aristocracia. Sombart localiza el origen de esta demanda creciente, a su vez, en el nuevo entendimiento de la venta del amor "libre", el refinamiento sensual y la economía política del cortejo durante el periodo. Este nuevo fundamento de la demanda implicó que la moda se convirtiera en la fuerza impulsora de las clases altas, saciadas solo con cantidades siempre crecientes y cualidades siempre cambiantes de los artículos de consumo. Esta intensificación de la demanda, sexual y política en sus orígenes, señaló el fin de un modo de vida señorial y, al mismo tiempo, estimuló a la manufactura y el comercio del naciente capitalismo.

A pesar de que el enfoque general de Sombart sobre la historia social del capitalismo fue, en vida del autor y aun después de muerto, criticado legítimamente por una diversidad de deficiencias empíricas e idiosincrasias metodológicas, permanece como una opción vigorosa (aunque subterránea)

respecto de las perspectivas marxiana y weberiana referidas a los orígenes del capitalismo occidental. Al centrarse en el consumo y la demanda, Sombart se sitúa en una tradición opuesta y minoritaria, situación de la que estuvo bien consciente. En este sentido, Sombart es un crítico temprano de lo que Jean Baudrillard llama el "espejo de la producción", donde se ha visto reflejada a sí misma la teoría dominante de la economía política del Occidente moderno. En su énfasis en la demanda, en sus observaciones clave acerca de la política de la moda, en su colocación de las directrices económicas dentro del contexto de las transformaciones de la sexualidad, y en su aproximación dialéctica de la relación entre lujo y necesidad, Sombart anticipa las recientes aproximaciones semióticas del comportamiento económico, tales como las de Baudrillard, Bourdieu, Kristeva y otros.

El enfoque de Sombart ha sido recientemente revivido en un estudio muy interesante de los antecedentes culturales del capitalismo temprano, elaborado por Chandra Mukerji (1983). La tesis de Mukerji, que coincide en muchos aspectos con la mía, reside en que, lejos de ser un resultado de la revolución industrial-tecnológica del siglo xix, la cultura materialista y el nuevo consumo orientado a productos y bienes de todo el mundo constituyeron el prerrequisito de la revolución tecnológica del capitalismo industrial. En esta inteligente crítica de la hipótesis weberiana referida al papel desempeñado por el ascetismo puritano en tanto suministrador del contexto cultural para el cálculo capitalista, Mukerji se apoya en Nef (1958) y otros. Su trabajo consiste en una sofisticada descripción histórica del marco cultural del capitalismo temprano en Europa. Ofrece nuevas evidencias y argumentaciones que ubican el gusto, la demanda y la moda en el núcleo de una narración cultural de los orígenes del capitalismo occidental, y que revaloran la importancia de las "cosas" en la ideología del renacimiento europeo (cf. Goldthwaite, 1983).

De acuerdo con nuestros propósitos, la relevancia del modelo de Sombart concerniente a la relación entre el lujo y el capitalismo temprano reside menos en las especificidades temporales y espaciales de su tesis (las cuales son de interés para los historiadores de la temprana Europa moderna) que en la generalización de la lógica de su argumentación relativa a las bases

culturales de la demanda de por lo menos ciertos tipos de mercancías, que él denomina lujosas.

Sugiero que consideremos a los bienes de lujo no tanto en contraposición a las necesidades (una oposición llena de problemas), sino como bienes cuya utilización principal es retórica y social, bienes que sólo son signos encarnados. La necesidad a la que ellos responden es fundamentalmente política. Mejor aún, debido a que la mayoría de los bienes de lujo son usados (aunque en formas y a costos especiales), tendría más sentido concebirlos como un "registro" especial del consumo (por analogía con el modelo lingüístico) que como clases especiales de cosas. Los signos de este registro, en relación con las mercancías, tienen todos o algunos de los atributos siguientes: a) restricción, ya sea por precio o por ley, a las elites; b) complejidad de adquisición, la cual puede darse o no en función de la "escasez" real; e) virtuosismo semiótico, es decir, la capacidad de comunicar mensajes sociales muy complejos (como lo hace la pimienta en la cocina, la seda en la vestimenta, las joyas en la ornamentación y las reliquias en el culto); d) el conocimiento especializado en tanto prerrequisito de su consumo "adecuado", es decir, la regulación por medio de la moda, y e) un alto grado de vinculación de su consumo con el cuerpo, la persona y la personalidad.

Desde el punto de vista del consumo, los aspectos de este registro del lujo pueden acumularse en cierto grado en alguna o todas las mercancías, pero, en determinados contextos, ciertas mercancías ejemplifican el registro del lujo y pueden describirse libremente como bienes lujosos. Vistas de este modo, todas las sociedades despliegan cierta demanda por los bienes lujosos, y puede argumentarse que sólo en Europa, después del año 1800 (al cabo del eclipse de las leyes suntuarias), esta demanda se liberó de la regulación política y se le abandonó al "libre" juego del mercado y de la moda. Desde esta perspectiva, la moda y la regulación suntuaria son los polos opuestos de la regulación social de la demanda, en particular de bienes con un alto valor discriminatorio. En ciertos períodos, el flujo de bienes lujosos muestra una poderosa tensión entre estas dos fuerzas; por ejemplo, los últimos siglos del *Ancien Régime* en Europa exhiben tensiones en ambas direcciones. Las primeras décadas de contacto colonial casi en todas partes muestran también

esta tensión entre las modas nuevas y las regulaciones suntuarias existentes. En estos contextos, la moda es el impulso para imitar a los nuevos poderes, y este impulso se integra con frecuencia, para bien o para mal, con los imperativos suntuarios tradicionales. Esta tensión, en el plano de la demanda y el consumo, se liga desde luego a las tensiones existentes entre los bienes y sistemas de producción indígenas y los introducidos, y entre los medios de cambio locales y los introducidos. Un estudio de caso extremadamente interesante sobre los complejos vínculos entre el comercio, la moda, la ley suntuaria y la tecnología es el ofrecido por Mukerji en relación con la conexión entablada entre Inglaterra y la India, en el siglo xvii, a propósito del calicó (Mukerji, 1983: 166-209).

El segundo aspecto importante examinado por Sombart es la complejidad de los vínculos entre los bienes lujosos y las mercancías más mundanas. En el caso del cual se ocupa, estos vínculos involucran sobre todo procesos de producción. Así, en la temprana Europa moderna, lo que Sombart considera bienes lujosos primarios tienen sus prerrequisitos en procesos de producción secundarios y terciarios: la manufactura de las máquinas para hilar la seda apoya a los centros de tejido de la seda, los cuales favorecen, a su vez, la creación de muebles y vestimenta de lujo; el aserradero produce la madera que es esencial en la producción de ebanistería fina; cuando el maderamen se agota, aumenta la demanda de carbón de parte de la industria del vidrio y otras industrias de lujo; las fundidoras de acero suministran la tubería esencial para las fuentes de Versalles (Sombart, 1979: 146-173). En la medida que el crecimiento en la demanda de bienes primarios lujosos es básica para expandir la producción de instrumentos de segundo y tercer orden, la demanda de objetos de lujo tiene implicaciones económicas en todo el sistema. Tal es el caso de las complejas y tempranas economías modernas.

No obstante, en economías de escala, estructura y organización industrial diferentes, la conexión entre los bienes lujosos y los bienes de otros registros de uso puede no involucrar los movimientos de un conjunto complejo de medios y formas de producción, sino básicamente los dominios del intercambio y el consumo. Así, volviendo al sistema kula de Oceanía, estudios recientes clarifican que el "comercio" de objetos valiosos de la kula se relaciona,

dentro de una intrincada dialéctica social y estratégica, con otros registros de intercambio, los cuales incluirían el matrimonio, la muerte, la herencia, la compraventa, etcétera (cf. en particular, Weiner, 1983).

Por último, el comercio de objetos lujosos bien podría suministrar un marco amistoso, duradero y sentimental para la conducción de intercambios de otros bienes y mediante otras maneras: aquí de nuevo, la existencia del *gimwali* o el intercambio de tipo mercantil en el contexto kula es un ejemplo primitivo adecuado (Uberoi, 1962). Un caso moderno de este tipo de relación entre el comercio según el registro lujoso y el comercio según registros menos connotados simbólicamente es el vínculo comercial existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al respecto, las pláticas entabladas sobre la limitación de las armas estratégicas pueden considerarse una especie altamente competitiva de comercio de lujo, donde el lujo en cuestión es la restricción nuclear garantizada del bando contrario. Los altibajos de este comercio constituyen el prerrequisito para el movimiento de otras mercancías, tales como los cereales y la alta tecnología. Este tipo de relación mediada políticamente entre los diferentes registros del comercio mercantil fue explotado de forma enérgica por la política estadounidense de "articulación", según la cual la renuencia soviética en una esfera de intercambio se castiga en otra esfera. En épocas y sociedades más simples, el equivalente a las pláticas de limitación de las armas estratégicas puede hallarse en la diplomacia del intercambio de obsequios entre comerciantes y jefes, o solo entre jefes, cuyas alteraciones pueden frustrar el comercio menos cargado de registros.

En todos estos casos, puede advertirse que la demanda del tipo de objetos valiosos que llamamos lujosos, y que yo he denominado el registro de lujo de cualquier flujo particular de mercancías, se conecta de forma íntima con otros registros más cotidianos y de alta rotación, de acuerdo con el lenguaje de las mercancías en la vida social

Este es un punto adecuado para plantear una observación general sobre las mercancías examinadas en este volumen, la mayoría de las cuales tienen una fuerte dimensión de lujo y, por tanto, parecen constituir una muestra favorecedora de un enfoque cultural, en contraposición a las mercancías

más humildes, de producción masiva. El hecho es que la línea divisoria entre mercancías lujosas y cotidianas no es solo una línea que se modifica históricamente, sino que, además, incluso en cualquier momento, lo que parece ser un ítem homogéneo de un rango semántico extremadamente limitado puede convertirse en algo muy diferente en el transcurso de la distribución y el consumo. Quizá el mejor ejemplo de una mercancía común cuya historia está llena de idiosincrasias culturales es el azúcar, como lo muestran Sydney Mintz (1979) y Fernand Braudel (1984). Así, la distinción entre mercancías modestas y exóticas no se basa en una diferencia de tipo, sino, con mayor frecuencia, en una desemejanza en la demanda a lo largo del tiempo o, a veces, en una desigualdad entre los lugares de la producción y los del consumo. Desde el punto de vista de la escala, el estilo y la importancia económica, Mukerji ha desarrollado una argumentación elocuente, al menos en el caso de la temprana Europa moderna, con objeto de no trazar fronteras rígidas entre el consumo de elite y el masivo, los bienes lujosos y los modestos, los bienes de consumo y los de capital, y la estética de la ostentación y los propósitos de los escenarios de la producción primaria (Mukerji, 1983: Capítulo 1).

En consecuencia, la demanda no es una respuesta mecánica a la estructura y el plano de la producción, ni un apetito natural insondable. Es un mecanismo social complejo que media entre los patrones a corto y largo plazo de la circulación mercantil. Las estrategias de desviación a corto plazo (como las examinadas en la sección anterior) pueden acarrear pequeños cambios en la demanda, los cuales podrían transformar de forma gradual los flujos de mercancías a largo plazo. Sin embargo, desde la perspectiva de la reproducción de patrones de flujos mercantiles (y no desde el punto de vista de su alteración), los patrones de la demanda por largo tiempo establecidos funcionan como restricciones sobre cualquier conjunto dado de rutas mercantiles. Uno de los motivos por los cuales estas trayectorias son inherentemente inconstantes, en particular cuando involucran flujos mercantiles transculturales, es que descansan en distribuciones inestables de conocimiento, un tema que analizaremos a continuación.

Conocimiento y mercancías

Esta sección trata de las peculiaridades del conocimiento que acompaña a los flujos interculturales de mercancías relativamente complejos y efectuados a gran distancia, a pesar de que aun en los lugares de flujo mercantil más homogéneos, a pequeña escala y de baja tecnología siempre existe el potencial para que surjan discrepancias en el conocimiento sobre las mercancías. Empero, cuando aumenta la distancia, la negociación de la tensión entre conocimiento e ignorancia se vuelve en sí misma una determinación fundamental del flujo de las mercancías.

Las mercancías representan formas sociales y distribuciones de conocimiento muy complejas. En primer lugar, y en términos generales, tal conocimiento puede ser de dos tipos: el conocimiento (técnico, social, estético y demás) que acompaña a la producción de la mercancía, y el conocimiento que acompaña al consumo apropiado de la mercancía. El conocimiento productivo que se atribuye a una mercancía es muy distinto del conocimiento de consumo que se confiere a la mercancía. Por supuesto, ambas atribuciones divergirán de modo proporcional en cuanto aumente la distancia social, espacial y temporal entre los productores y los consumidores. Como veremos, no es correcto considerar el conocimiento en el plano de la producción de una mercancía como exclusivamente técnico y empírico, y el conocimiento en el plano del consumo como solo valorativo o ideológico. En ambos polos, el conocimiento tiene componentes técnicos, mitológicos y valorativos, y son susceptibles de interacción mutua y dialéctica.

Si concebimos que algunas mercancías tienen una "historia vital" o una "carrera" en un sentido significativo, entonces se vuelve útil considerar la distribución del conocimiento en distintas etapas de su carrera. Tales carreras son más uniformes en el polo productivo, ya que resulta probable que, durante la producción, la mercancía en cuestión haya tenido menos oportunidades de acumular una biografía idiosincrásica o de disfrutar de una carrera peculiar. Así, el sitio de la producción mercantil quizá esté dominado por recetas de fabricación estandarizadas culturalmente. Las fábricas, los campos, las fundiciones, las minas, los talleres y la mayoría de los demás sitios de la producción son depositarios, en primer término,

de un conocimiento técnico productivo muy estandarizado. No obstante, es importante resaltar aquí que el conocimiento técnico requerido para la producción de mercancías primarias (cereales, metales, hidrocarburos) tiende a ser más estandarizado que aquel necesario para la fabricación de mercancías secundarias o de lujo, donde el gusto, el juicio y la experiencia individual suelen provocar claras variaciones en el conocimiento productivo. Ahora bien, la tendencia de la mercantilización en el plano productivo se orienta hacia la estandarización del conocimiento técnico. Por supuesto, en el caso de todas las mercancías, sean primarias o no, el conocimiento técnico siempre está muy compenetrado con presuposiciones cosmológicas, sociológicas y rituales, las cuales se comparten de forma amplia. Los alfareros azande de Evans-Pritcharcl (1976), los campesinos colombianos de Taussig (1980), los fabricantes gawan de canoas de Nancy Munn (1977), los productores panameños de azúcar de Stephen Gudeman (1984), todos ellos combinan los aspectos tecnológico y cosmológico en su discurso productivo. En la mayoría de las sociedades, este conocimiento productivo se sujeta a cierta desigualdad en su distribución social debido a criterios simples de edad y sexo, a criterios complejos que distinguen a familias, castas o pueblos artesanales del resto de la sociedad, o a divisiones más complejas del trabajo que separan a los empresarios y los trabajadores, con base en su papel, de las amas de casa y los consumidores, tal como ocurre en la mayor parte de las sociedades modernas.

No obstante, existe otra dimensión del conocimiento productivo, a saber, el conocimiento del mercado, del consumidor y del destino de la mercancía. En las sociedades pequeñas y tradicionales, este conocimiento es relativamente directo y completo con respecto al consumo interno, pero resulta más errático e incompleto en relación con la demanda externa. En los contextos precapitalistas, la traducción de las demandas externas a los productores locales constituye el dominio del comerciante y sus agentes, quienes proporcionan puentes logísticos y de precio entre mundos de conocimiento cuyo contacto directo es mínimo. Así, es casi seguro que los habitantes tradicionales de las selvas de Borneo ignoraran que los nidos de pájaros por ellos vendidos a los intermediarios se empleaban en China con fines curativos y culinarios. Este paradigma de puentes mercantiles,

tendidos a través de los enormes vacíos de conocimiento entre productores y consumidores, caracteriza el movimiento de la mayoría de las mercancías a lo largo de la historia. En la actualidad, esos puentes persisten, en virtud de las diferencias culturales insalvables (como aquellas entre los productores de opio en Asia y el Medio Oriente y los adictos y traficantes en Nueva York), o de la especialización infinita de la producción mercantil (la distancia entre un volumen mercantil particular, por ejemplo de cobre, y los cientos de transformaciones que ocurrirán antes de que llegue al consumidor). Se debe señalar que estas grandes diferencias de conocimiento sobre el mercado por parte de los productores suelen ocasionar cuantiosas ganancias para el comercio y pérdidas relativas para la clase o el país productor en relación con los consumidores y comerciantes (cf. Spooner: Capítulo VII).

Los problemas que involucran el conocimiento, la información y la ignorancia no se restringen a los polos de la producción y el consumo dentro de las carreras de las mercancías, sino que también caracterizan a los propios procesos de circulación e intercambio. En una vigorosa descripción cultural del bazar marroquí, Clifford Geertz sitúa la búsqueda de información confiable en el núcleo de esta institución y muestra cuán difícil es para los actores de este sistema obtener información confiable sobre las personas o las cosas (Geertz, 1979). Una buena parte de la estructura institucional y la forma cultural del bazar es de dos filos, lo cual dificulta la obtención del conocimiento confiable y, al mismo tiempo, facilita su búsqueda. Es tentador concluir que estos laberintos informativos complejos y organizados culturalmente son un rasgo particular de las economías de tipo bazar, y que están ausentes en las economías simples no mercantilizadas, así como en las economías industriales. Con todo, como sostiene el propio Geertz (1979: 224), el bazar es una categoría analítica que bien puede aplicarse al mercado de automóviles usados (aunque no al de los nuevos) en las economías industriales contemporáneas. Se puede generalizar esta aserción: la búsqueda de información de tipo bazar caracterizaría todo escenario de intercambio donde la calidad y la apropiada evaluación de los bienes no esté estandarizada, a pesar de que puedan variar enormemente los motivos de esta carencia de estandarización, de la volatilidad de los precios y de la calidad incierta

de cosas específicas de cierto tipo. De hecho, los sistemas de intercambio de objetos valiosos kula, de los autos usados y de las alfombras orientales, aunque ocurran en escenarios culturales e institucionales muy diferentes, pueden involucrar todos economías informativas de tipo bazar. Con todo, las diferencias de conocimiento y las dificultades de comunicación entre productor y consumidor no son obstáculos reales en contra del vigoroso flujo de mercancías destinadas a múltiples transformaciones industriales, antes de que lleguen a manos del consumidor. En el caso de tales mercancías (a veces llamadas mercancías primarias), series casi infinitas de pequeños y superpuestos círculos de conocimiento pueden vincular al productor original con el consumidor terminal. Empero, este no es el caso de las mercancías por destino, las cuales son ampliamente "fabricadas", en el sentido de Nancy Munn, en una etapa temprana de sus carreras (Munn, 1977). Estas requieren mecanismos más directos para la negociación satisfactoria del precio, y la equiparación del gusto del consumidor con la destreza, el conocimiento y la tradición del productor. Quizá los mejores ejemplos de este tipo de comunicación más directa incluyan el comercio internacional de ropa hecha (Swallow, 1982) y el comercio del arte turístico en lo que Nelson Graburn (1976) ha denominado el cuarto mundo.

Dondequiera que existan desigualdades en el conocimiento que acompaña al movimiento de las mercancías, entran en escena los problemas referidos a la autenticidad y la experiencia. Varios de los ensayos incluidos en este volumen abordan ambos temas. El primero es el de Brian Spooner acerca de las alfombras orientales, el cual constituye una interpretación antropológica estimulante sobre un problema que combina la historia del arte, la historia económica y el análisis cultural. El tema de Spooner —los cambiantes términos de la relación entre los productores y consumidores de alfombras orientales— trae a colación un ejemplo en particular sorprendente de una mercancía que vincula dos mundos muy aislados de significado y función. Comercializadas originalmente mediante una serie de centros ubicados en Asia y Europa, cada uno de los cuales imponía filtros económicos y de gusto, las alfombras orientales involucran hoy en día una negociación mucho más directa entre los gustos de la clase media alta occidental y las organizaciones de tejedores del Asia Central. Sin embargo, este cambio no

conlleva simples modificaciones en el contexto de la negociación del precio. Lo que se está negociando, tal como destaca Spooner, es la autenticidad. Es decir, conforme se acentúa el ritmo de movilidad social y el apiñamiento en la cima de las sociedades occidentales, y conforme la tecnología permite la multiplicación de los objetos de prestigio, tiene lugar un creciente diálogo irónico entre la necesidad occidental de criterios siempre cambiantes de autenticidad y los motivos económicos de los productores y mercaderes. Además, el mundo de los comerciantes se entrelaza con la política de los conocedores y peritos, y la formalización del saber popular en materia de alfombras en el Occidente.

En general, puede afirmarse que en el caso de mercancías lujosas como las alfombras orientales, cuando se acorta la distancia entre consumidores y productores, la cuestión de la exclusividad cede su lugar a la autenticidad. Durante las condiciones premodernas, el movimiento a larga distancia de las mercancías preciosas implicaba costos que convertían su propia adquisición en un distintivo de exclusividad y un instrumento de diferenciación suntuaria. En donde el control de tales objetos no se sujetaba de forma directa a la regulación estatal, se hallaba indirectamente regulado por el costo de adquisición, de modo que permanecían en las manos de unos cuantos individuos. Con el cambio tecnológico, la reproducción masiva de estos objetos se hace posible, el diálogo entre los consumidores y la fuente original se vuelve más directo y los consumidores de clase media se vuelven capaces (legal y económicamente) de competir por la obtención de estos objetos. La única forma de preservar la función de estas mercancías en las economías de prestigio del Occidente moderno reside en enredar los criterios de autenticidad. La competencia muy complicada y la colaboración entre "expertos" del mundo del arte, comerciantes, productores, académicos y consumidores forman parte de la economía política del gusto en el Occidente contemporáneo. Quizá esta economía política haya sido mejor explorada en Francia, por Baudrillard (1989) y Bordieu (1984).

Existe un conjunto particular de asuntos relativos a la autenticidad y la peritación que infestan al Occidente moderno, y este conjunto, que gira alrededor de cuestiones como el buen gusto, el conocimiento experto, la "originalidad" y la distinción social, es particularmente visible en el dominio del arte y los objetos

artísticos. En su ensayo "The work of art in the age of mechanical reproduction", Walter Benjamin (1968; edición original, 1936) reconoció que el aura de una auténtica obra de arte se entrelaza con su originalidad, y que esta aura, que es la base de su autenticidad, está amenazada por las modernas tecnologías de reproducción. En este sentido, las copias, falsificaciones e imitaciones —que tienen una larga historia— no amenazan el aura de lo original, sino que buscan compartir la originalidad. En una nota de este ensayo, Benjamin incluyó la siguiente observación: "Sin duda, en la época de su producción, aún no podía decirse que una pintura medieval de la Madonna era 'auténtica'. Sólo se volvió 'auténtica' durante los siglos subsecuentes y, tal vez más sorprendentemente, en el siglo xix" (1968: 243). En un trabajo referido al concepto de "firma" en el mundo del arte moderno, Baudrillard (1989: 108-109) va más lejos:

> ...hasta el siglo xix, la copia de una obra original tenía un valor propio, era una práctica legítima. En nuestros días la copia es ilegítima, "inauténtica": ya no es arte. Igualmente, el concepto de falsificación ha cambiado, o más bien ha surgido con la modernidad. En otro tiempo, los pintores solían usar colaboradores, o negros: uno era especialista en árboles, otro en animales. El acto de pintar, y por tanto la firma, tampoco revestían la misma exigencia mitológica de autenticidad —imperativo moral al que está consagrado el arte moderno, por el cual es moderno— desde que la relación con la ilusión, y por tanto el sentido mismo del objeto artístico, han cambiado al mismo tiempo que el acto de pintar.

Con esto en mente, es posible colocar el polo del consumo de los procesos observados por Spooner en el contexto de lo que Baudrillard concibe como el surgimiento del "objeto", es decir, una cosa que ya no es un producto o una mercancía, sino, en esencia, un signo dentro de un sistema de signos de estatus. Los objetos, en la perspectiva de Baudrillard, solo emergen completos durante este siglo en el Occidente moderno, en el contexto de las formulaciones teóricas de la Bauhaus (Baudrillard, 1981: 224), aunque se ha mostrado recientemente que el surgimiento de los objetos en la cultura europea puede situarse en el Renacimiento (Mukerji, 1983). La moda es el medio cultural donde los objetos, en el sentido de Baudrillard, se mueven.

Con todo, los problemas de la autenticidad, peritación y evaluación de las mercancías no son obviamente fenómenos del siglo XX. Ya hemos mencionado el ensayo de Patrick Geary, incluido en este volumen, sobre el comercio de reliquias en la Europa carolingia. Aquí existe un problema fundamental con respecto a la autenticación y, también en este caso, dicho problema se vincula al hecho de que las reliquias circulan en el transcurso de largos periodos, a través de muchas manos y de extensas distancias. Además, está presente la preocupación por la falsificación, que constituye una obsesión en torno a los orígenes. Sin embargo, el régimen cultural de autenticidad es muy distinto del moderno. Aunque existe un conjunto pequeño de procedimientos técnicos y prerrogativas clericales implicado en la autenticación, es con mucho una cuestión en la cual desempeña un papel central el entendimiento popular referido a la eficacia del ritual y los criterios tradicionales. La autenticidad no es aquí el coto de los criterios expertos y esotéricos, sino el de los criterios populares y públicos de verificación y confirmación.

El problema del conocimiento especializado y de la autenticidad adopta otra forma en el fascinante estudio de caso de William Reddy, que versa sobre los cambios en la organización del conocimiento experto en la industria textil francesa, verificados antes y después de la Revolución de 1789. Con base en dos diccionarios comerciales publicados en Francia, uno hacia 1720 y el otro en 1839, Reddy sostiene que, a pesar de que la Revolución francesa pareció destruir de la noche a la mañana todo un modo de vida, esto no fue lo que ocurrió. El gran edificio del conocimiento y los hábitos cotidianos se modificó gradual, incierta y renuentemente. Un ejemplo de esta crisis general —un periodo durante el cual el conocimiento, la práctica y la política eran discordes— puede advertirse en el codificado mundo del conocimiento relativo al comercio de textiles. En los complejos y tempranos sistemas modernos de flujo mercantil, Reddy nos muestra que la relación entre conocimiento técnico, gusto y regulación política es muy compleja y de cambio gradual. Son más difíciles de modificar los modos de conocer, juzgar, comerciar y comprar que las ideologías que subyacen a las asociaciones, los precios y la producción. Se necesitó una serie muy compleja de cambios graduales y asincrónicos

en la política, la tecnología y la cultura, verificados a lo largo de más de una centuria, antes de que surgiera una nueva estructura epistemológica de clasificación de los productos comerciales. En este nuevo esquema, puede decirse que los bienes fueron reconcebidos como productos, y la "mirada" (en el sentido que le da Foucault) del consumidor y el comerciante cedió su lugar a la "mirada" del productor. En el primer tercio del siglo XIX, los textiles fueron considerados con base en lo que Baudrillard llama el "espejo de la producción". En este marco industrial temprano, la autenticidad ya no se relaciona con la peritación, sino con los métodos de producción objetivamente determinados. La experiencia del comerciante y el financiero se sustituye por el conocimiento de la producción industrial. El ensayo de Reddy nos recuerda que la historia social de las cosas, aun de cosas modestas como la ropa, refleja modificaciones muy complejas en la organización del conocimiento y los modos de producción. Tales cambios tienen una dimensión cultural que no puede deducirse de, o reducirse a las variaciones tecnológicas y económicas.

Un último ejemplo de la intrincada relación entre la autenticidad, el gusto y la política vinculadora productor-consumidor tiene que ver con lo que se ha llamado artes étnicas o turísticas. Estas han estado sujetas a un estudio minucioso por parte de los antropólogos, y existe una importante antología de ensayos en la materia (Graburn, 1976).

Aunque los fenómenos agrupados en este rubro incluyen una enredada diversidad de objetos, tal como Graburn advierte en su ensayo introductorio, tales fenómenos constituyen quizá el mejor ejemplo de las diferencias en gusto, entendimiento y uso entre los productores y los consumidores. En el extremo del productor, se hallan las tradiciones de manufactura (de nuevo, según Munn), las cuales cambian en respuesta a las imposiciones o tentaciones comerciales y estéticas de los consumidores a gran escala y ubicados a gran distancia. En el otro extremo, se encuentran los objetos de recuerdo, las curiosidades, las colecciones, las exhibiciones y las competiciones de estatus, experiencia y comercio en que se apoyan tales cosas. Entre ambos extremos, existe una serie de vínculos comerciales y estéticos, en ocasiones complejos, múltiples e indirectos; y en otras, abiertos, escasos y directos. En los dos casos, el arte turístico constituye un tráfico

mercantil especial, donde las identidades grupales de los productores son símbolos de la política de estatus de los consumidores.

El ensayo de Alfred Gell, contenido en este volumen, presenta algunas observaciones particularmente inteligentes acerca de los tipos de refracciones complicadas de percepción que pueden acompañar la interacción entre pequeñas poblaciones tradicionales, y economías y sistemas culturales a gran escala. Al reflexionar sobre el interés de los *muria* en la latonería producida fuera de su región, Geil señala lo siguiente:

> ...los *muria*, que carecen de una tradición artesanal propia y de una producción de bienes de prestigio, son en realidad mucho más parecidos a los occidentales, quienes buscan la autenticidad en lo exótico, que a los miembros de las sociedades artesanales tradicionales, categoría a la cual creen erróneamente que pertenecen.

Trabajos recientes en materia de exhibiciones y museos, elaborados por antropólogos e historiadores (Benedict, 1983; Breckenridge, 1984), así como por semiólogos y teóricos literarios, amplían y profundizan nuestra comprensión del papel desempeñado por los objetos del "otro" en la creación del objeto de recuerdo, la colección, la exhibición y el trofeo en el Occidente moderno (Baudrillard, 1969; 1989; Stewart, 1984). De un modo más general, puede decirse que, conforme se complican los viajes institucionales y espaciales de las mercancías, y se incrementan las desavenencias entre productores, comerciantes y consumidores, suelen aparecer las mitologías culturalmente formadas acerca del flujo mercantil.

Las historias e ideologías culturalmente construidas acerca del flujo mercantil constituyen un lugar común en todas las sociedades. Sin embargo, tales historias adquieren cualidades en particular intensas, novedosas y sorprendentes cuando son muy grandes las distancias espaciales, cognitivas o institucionales entre la producción, la distribución y el consumo. Tal distanciamiento puede ser institucionalizado dentro de una sola economía compleja o darse en función de nuevos tipos de vínculos entre sociedades y economías hasta entonces separadas. El divorcio institucionalizado (en materia de conocimiento, interés y papel) entre las personas involucradas en

diversos aspectos del flujo mercantil genera mitologías especializadas. En esta sección analizo tres variaciones de tales mitologías y los contextos en que aparecen. En primer lugar, se hallan las mitologías producidas por los comerciantes y especuladores que son muy indiferentes con respecto a los orígenes de la producción y el destino de consumo de las mercancías, excepto cuando estas esferas influyen en las fluctuaciones de los precios. Los mejores ejemplos de este tipo son los mercados de mercancías de entrega futura en las complejas economías capitalistas, particularmente el intercambio de cereales en Chicago a principios de siglo. En segundo lugar, se encuentran las mitologías producidas por los consumidores (o por los consumidores potenciales) ajenos a los procesos de producción y distribución de las mercancías básicas. Aquí los mejores ejemplos provienen de los cultos a cargo de Oceanía. En tercer lugar, están las mitologías producidas por los trabajadores que participan en el proceso de producción, quienes están por completo alejados de la lógica de la distribución y el consumo de las mercancías que ellos elaboran. Al respecto, los modernos mineros bolivianos del estaño, descritos por Michael Taussig en *The devil and commodity fetichism in South America*, constituyen un excelente ejemplo. A continuación, examinaré brevemente cada una de estas variantes, comenzando por los mercados capitalistas de mercancías.

A primera vista, la esfera mercantil del moderno sistema mundial capitalista parece ser una gran máquina impersonal gobernada por movimientos a gran escala de los precios, intereses institucionales complejos, y con un carácter totalmente desmitificado, burocrático y autorregulado. En apariencia, nada se encuentra más alejado que esto respecto de los valores, los mecanismos y la ética de los flujos mercantiles en sociedades a pequeña escala. Con todo, esta impresión es falsa.

En este punto, debe quedar claro que el capitalismo no solo representa un diseño tecnoeconómico, sino también un sistema cultural complejo con una historia muy particular en el Occidente moderno. Esta perspectiva, que siempre ha tenido exponentes distinguidos en la historia económica y social (Weber, 1976; Sombart, 1979; Nef, 1958; Braudel, 1984; López, 1971; Thrisk, 1978), ha recibido un nuevo impulso de los antropólogos

y sociólogos de la cultura euroamericana (Baudrillard, 1989; Bourdieu, 1984; Douglas e Isherwood, 1981; Mukerji, 1983; Sahlins, 1976).

El estudio del diseño cultural del capitalismo en su forma estadounidense ha sido emprendido con gran vigor durante la última década, y los historiadores, los antropólogos y los sociólogos están comenzando a elaborar un rico panorama de la cultura capitalista en Estados Unidos (Collins, 1979; DiMaggio, 1982; Lears, 1984; Marcus, 1985; Schudson, 1984). Aunque este amplio contexto está fuera del alcance del presente análisis, queda claro que el capitalismo es en sí mismo una formación cultural e histórica muy compleja, en que las mercancías y sus significados han desempeñado un papel fundamental. Un ejemplo de las peculiares y sorprendentes expresiones culturales del capitalismo moderno es el mercado de mercancías de entrega futura de Estados Unidos el cual se desarrolló a mediados del siglo XIX y cuyo caso paradigmático es el intercambio de cereales de Chicago.

El comercio de mercancías a granel perdura como una parte en extremo importante del comercio mundial y del sistema económico mundial (cf., por ejemplo, Adams y Behrman, 1982), y este comercio mercantil a gran escala permanece quizá como el terreno esencial donde pueden observarse las contradicciones del capitalismo internacional. Una de tales contradicciones es la existente entre la ideología librecambista del capitalismo clásico y las diversas formas de proteccionismo, cárteles y acuerdos de regulación que restringen la libertad de acción de las coaliciones de productores (Nappi, 1879). Los mercados de mercancías de entrega futura representan el espacio institucional donde los riesgos corridos por los flujos nacionales e internacionales de estas mercancías se negocian mediante la protección de unos y la especulación de otros. Los mercados de mercancías de entrega futura giran alrededor de un gran número de transacciones que involucran la firma de contratos para comprar y vender mercancías en fechas futuras. Este comercio basado en contratos es un comercio de papel que rara vez implica intercambios reales de mercancías entre los comerciantes. Al igual que la bolsa de valores, estos mercados son torneos especulativos donde la interacción entre el precio, el riesgo y el intercambio parece estar separada en su totalidad, desde la perspectiva del espectador, de todo el proceso

de producción, distribución, venta y consumo. Se puede decir que la especulación de mercancías de entrega futura lleva a cabo una disociación dramática entre el precio y el valor, donde este último carece de importancia. En este sentido, la lógica del comercio en las mercancías de entrega futura es, siguiendo a Marx, un tipo de metafetichización donde no solo la mercancía se vuelve un sustituto de las relaciones sociales subyacentes, sino que también el movimiento de los precios se convierte en un sustituto autónomo del flujo de las mercancías mismas.

A pesar de que este doble plano de remoción de las relaciones sociales de producción e intercambio diferencia los mercados de mercancías de entrega futura de otras contiendas de valor, como aquellas representadas en la kula, existen algunos paralelos interesantes y reveladores. En ambos casos, la contienda ocurre en una arena especial, aislada de la vida económica práctica y sujeta a reglas especiales. En ambos casos, lo que se intercambia son símbolos de valor, los cuales pueden transformarse en otros medios sólo mediante un conjunto complejo de procedimientos y en circunstancias inusuales. En ambos casos, hay formas específicas según las cuales la reproducción de la economía en su conjunto se articula con la estructura de la economía de contienda.

Con todo, quizá lo más importante sea que, en ambos casos, existe un espíritu agonístico, romántico, individualista y lúdico que se contrapone al espíritu del comportamiento económico cotidiano. Es muy claro el papel de la kula en la construcción de fama y prestigio para los habitantes de Oceanía. Sin embargo, ocurre lo mismo en los mercados de mercancías de entrega futura. En la segunda mitad del siglo xix, el "reñidero del trigo" (el mercado de cereales) en Chicago fue obviamente el escenario donde se incrementaba y decrecía la reputación de los individuos, donde tenían lugar competencias intensas y obsesivas entre sujetos específicos, y donde se exhibían arrogantes esfuerzos por parte de algunas personas para acaparar el mercado (Dies, 1925; 1975 [1929]). A pesar de que este espíritu agonístico, obsesivo y romántico no ha desaparecido de los mercados, como lo indica el caso de los hermanos Hunt con respecto a la plata (Marcus, 1985), la estructura moral, institucional y política que rige la especulación mercantil ha cambiado sustancialmente desde el siglo xix. Por supuesto,

existen muchas diferencias de escala, medios, contexto y objetivos entre la kula y los mercados de mercancías de entrega futura. Empero, las similitudes son reales y, como ya lo he apuntado, muchas sociedades crean terrenos especializados para las contiendas de valor, donde se comercian símbolos mercantiles especializados; y tal comercio influye, mediante las economías de estatus, poder o riqueza, en los flujos mercantiles más mundanos. El comercio de reliquias, el mercado de mercancías de entrega futura, la kula, el potlatch y el buzkashi de Asia Central (Azoy, 1982) son ejemplos de tales "contiendas de valor". En cada caso, se necesita efectuar un análisis más exhaustivo de los modos de articulación de las economías de "contienda" con sus contextos mercantiles más rutinarios.

La mitología de la circulación generada en los mercados de mercancías (así como, de otras maneras, en los mercados de valores) es una mitología del rumor mezclada con información más confiable referida a las reservas mercantiles, las regulaciones gubernamentales, los cambios de estación, las variables del consumidor, los desarrollos intramercado (incluyendo la intención o los motivos divulgados por otros especuladores), etc. Esto constituye un escenario siempre cambiante (e infinito en potencia) de variables que influyen en el precio. A pesar de que existen significativas mejoras en la base técnica para analizar y participar con éxito en el mercado, persiste la búsqueda casi mágica de la fórmula (adivinatoria en vez de eficaz) que resulte ser de predicción infalible en materia de fluctuaciones de precios (Powers, 1973: 7). La base estructural de esta mitología de circulación mercantil consiste en el hecho de que juega indefinidamente con la modificación de los precios, de que busca extinguir una serie inagotable de variables que influyen en el precio y de que su preocupación por las mercancías es puramente informativo y semiótica, y está divorciada por completo del consumo. El deseo irracional de acaparar el mercado de cierta mercancía, la búsqueda no intuitiva de fórmulas mágicas para predecir los cambios de precios, la histeria colectiva controlada, todos ellos son productos de esta completa conversión de las mercancías en signos (Baudrillard, 1989), los cuales son capaces de producir utilidades si se les manipula de la forma correcta. La contraparte primitiva de este tipo de construcción mitológica y descontextuada de mercancías se encuentra

en uno de los temas antropológicos fundamentales, a saber, los cultos de cargo, los cuales se multiplicaron en las sociedades carentes de Estado y ubicadas en el Pacífico, durante este siglo.

Los cultos de cargo son movimientos sociales de carácter profundo y milenarista centrado en el simbolismo de los bienes europeos. Se han verificado sobre todo en el Pacífico, a partir de los primeros contactos coloniales, aunque tienen antecedentes precoloniales y analogías con otras sociedades. Han sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de los antropólogos, quienes los conciben como fenómenos psicológicos, religiosos, económicos y políticos. A pesar de que existe una considerable variación en la interpretación antropológica de estos movimientos, la mayoría de los observadores concuerdan en que el surgimiento de los cultos de cargo en las tempranas sociedades coloniales del Pacífico se vincula a la transformación de las relaciones de producción en ese nuevo contexto; la incapacidad de los nativos para comprar los novedosos y atractivos bienes europeos; el arribo de un nuevo sistema teológico y cosmológico a través de los misioneros, y la ambivalencia resultante con respecto a las formas rituales indígenas. La consecuencia de ello fue la aparición de una serie de movimientos diseminados a lo largo de Oceanía (y después en Melanesia), cuyo éxito, duración y fuerza fueron desiguales. Tales movimientos imitaban y protestaban en contra de las formas sociales y rituales europeas, y adoptaban posturas ya sea fuertemente opuestas o bien restauradoras en relación con sus propios mitos y ritos de prosperidad e intercambio. En el simbolismo de muchos de estos movimientos, desempeñó un papel importante la promesa del líder-profeta referida al arribo de bienes valiosos europeos (por avión o por barco) y a su "diseminación" entre los verdaderos creyentes.

Es difícil cuestionar la argumentación de Worsely (1957) y otros en el sentido de que el simbolismo de la llegada misteriosa de bienes europeos tiene mucho que ver con la distorsión de las relaciones indígenas de intercambio durante el dominio colonial y con la percepción nativa de la contradicción aparente entre la riqueza de los europeos (a pesar de su mínimo esfuerzo) y la pobreza aborigen (a pesar de su arduo trabajo). No es sorprendente, dada su repentina sujeción al complejo sistema económico

internacional, del cual sólo percibían pocos y misteriosos aspectos, que su respuesta fuera en ocasiones el intento de duplicar lo que consideraban el modo mágico de producción de esos bienes.

Cuando observamos el simbolismo y la práctica ritual de estos movimientos, es posible advertir que constituyen no solo un mito acerca de los orígenes de las mercancías europeas, sino también un intento de duplicar ritualmente lo que se percibía como modalidades sociales de la vida europea. Tal es el significado del uso de formas, giros idiomáticos, títulos, etc., de la milicia europea por parte de estos movimientos. Aunque ordenada con frecuencia según patrones indígenas, la práctica ritual de los cultos de cargo no fue en muchos casos más que un esfuerzo masivo por imitar aquellas formas sociales europeas que parecían más favorables para la producción de bienes europeos. En este tipo de fetichismo invertido, lo que se duplicaba era aquello que se consideraba como las formas sociales y lingüísticas europeas más eficaces, con el propósito de incrementar la probabilidad del arribo de las mercancías europeas. Empero, Glynn Cochrane (1970) nos recuerda que estos cultos —aunque distorsionados— no perseguían la obtención de todas las mercancías europeas, sino solo la de aquellas que eran vistas como propicias en particular para el mantenimiento de las desigualdades de estatus en las sociedades locales. Asimismo, los cultos de cargo representan una mitología específica de producción europea de bienes terminados, concebida por los nativos involucrados en la producción de mercancías primarias dirigidas al comercio mundial, así como el rito asociado imitativo y de renovación. Las mercancías incluidas en el cargo, del mismo modo que los objetos valiosos de la kula y otras formas indígenas de intercambio especializado, son consideradas como metonímicas de todo el sistema de poder, prosperidad y estatus. Las creencias del cargo constituyen un ejemplo extremo de las teorías que suelen proliferar cuando los consumidores se mantienen por completo ignorantes de las condiciones de producción y distribución de las mercancías, y carecen de un acceso libre a ellas. Tal privación crea las mitologías del consumidor alienado, de manera similar a aquella en que los modernos mercados capitalistas generan las mitologías del comerciante alienado. Por último, abordaremos la tercera variante: las mitologías de los productores

al servicio de las fuerzas de la demanda y la distribución que se hallan fuera de su control y más allá de su universo de conocimiento.

Para este tipo de mitología, la mejor descripción con la cual contamos es el trabajo de Taussig sobre el cambio del simbolismo demoníaco entre los mineros bolivianos del estaño, ocurrido a partir de la llegada de los españoles (Taussig, 1980). El relato discurre brevemente como sigue. Antes de la llegada de los españoles, la minería era una actividad a pequeña escala manejada como monopolio estatal. Con el arribo de los españoles, la minería se convirtió en el fundamento voraz de la economía colonial, la causa del trastorno masivo y de la incrementada mortalidad entre la población de indios aimaraes de Bolivia. La minería había involucrado siempre el rito y la magia, pero solo después de la conquista española implicó al espíritu del mal, simbolizado en la figura llamada Tío, entendido en el nuevo idioma cristiano como el demonio, quien era considerado el espíritu propietario de las minas. La figura demoníaca vino a representar a todas las fuerzas extrañas de la nueva economía capitalista, a la cual los mineros a un mismo tiempo temían, odiaban y servían, en oposición a sus formas tradicionales de economía recíproca. Atrapados entre, por una parte, el control estatal de la producción y el mercado internacional y, por otra, el demonio, desarrollaron un rito que refleja las ambigüedades y contradicciones de una práctica económica que nada en las aguas de dos mundos incompatibles:

> De hecho, la extensa cadena de intercambios efectuados en los Andes es esta: los campesinos intercambian obsequios con el espíritu propietario; este convierte esos regalos en el metal precioso; los mineros extraen este metal, que solo "encuentran" cuando han realizado ritos de intercambio de obsequios con el espíritu; el trabajo de los mineros, encarnado en el mineral de estaño, se vende como mercancía a los propietarios y patrones legales; estos últimos venden el mineral en el mercado internacional. Así, el intercambio recíproco de obsequios finaliza como intercambio mercantil; situados entre el demonio y el Estado, los mineros mediante esa transformación. Este círculo asegura la esterilidad y la muerte, en lugar de la fertilidad y la prosperidad. Se basa en la transformación de la reciprocidad en intercambio mercantil (Taussig, 1980: 224).

Los ritos de producción en las minas de estaño de Bolivia y su mitología asociada no constituyen un simple remanente de ritos campesinos de producción. Reflejan las tensiones de una sociedad donde la mercantilización no se ha vuelto un lugar común, donde el fetichismo de las mercancías, debido a esta hegemonía incompleta, se considera maligno y peligroso y, en consecuencia, tiene lugar un intento paradójico de envolver al demonio en ritos recíprocos. Este no es el fetichismo mercantil en el clásico sentido marxista (donde los productos esconden y representan relaciones sociales), sino un fetichismo más literal, en el cual la mercancía, iconizada como el demonio, se convierte en el pivote de un conjunto de transacciones rituales dirigidas a eclipsar los riesgos cosmológicos y físicos de la minería. En esta mitología de productores/extractores alienados, las fuentes impersonales e invisibles de control (el Estado) y la demanda (el mercado mundial) se concentran en un icono de peligro y avidez, metáforas sociales de la economía mercantil. A pesar de que la descripción de Taussig, como la de Gregory y muchos otros, tiende a sobrestimar el contraste entre la economía de obsequios y la economía de mercancías, constituye un relato persuasivo del fetichismo mercantil literal que parece acompañar a la producción de mercancías primarias destinadas a mercados desconocidos e incontrolables.

En cada uno de los ejemplos examinados, las mercancías de entrega futura, los cultos de cargo y la mitología minera, las percepciones mitológicas de la circulación mercantil se generan como resultado del alejamiento, la indiferencia o la ignorancia de los participantes con respecto a todos los aspectos, salvo uno de ellos, involucrados en la trayectoria económica de la mercancía. Aislado ya sea en la producción, en el mercado especulativo o en el lugar de consumo del flujo mercantil, el conocimiento técnico tiende a subordinarse rápidamente ante teorías subculturales más idiosincrásicas acerca de los orígenes y destinos de las cosas. Se trata de algunos ejemplos de las numerosas formas que puede adoptar el fetichismo de las mercancías cuando existen marcadas desigualdades en la distribución del conocimiento relacionado con la trayectoria de la circulación mercantil.

Resta un último aspecto por analizar acerca de la relación entre conocimiento y mercancías, el cual nos recuerda que la comparación de las sociedades capitalistas con otros tipos de sociedades es una cuestión complicada.

En las sociedades capitalistas complejas no solo se trata del caso de que el conocimiento esté segmentado (aún fragmentado) entre los productores, distribuidores, especuladores y consumidores (y entre las diferentes subcategorías de ellos). El hecho es que el conocimiento sobre las mercancías se ha mercantilizado. Tal mercantilización del conocimiento relacionado con las mercancías forma parte, por supuesto, del problema más amplio de la economía política de la cultura (Collins, 1979), donde la experiencia, el credencialismo y el ascentismo intelectual (Bourdieu, 1984) desempeñan distintos papeles. Así, aunque en las economías más simples existe un complejo intercambio de cosas, solo con base en la creciente diferenciación social, técnica y conceptual podemos hablar de un intercambio de criterios con respecto a las cosas. Es decir, solo en esta última situación se generaliza la compraventa de experiencia con respecto a lo apropiadamente técnico, social y estético en materia de mercancías. Desde luego, semejante intercambio de criterios mercantiles no es exclusivo de las sociedades capitalistas, pero existen sólidas evidencias de que en tales sociedades este intercambio es más denso.

Además, en las economías capitalistas contemporáneas es difícil separar la mercantilización de los bienes de aquella de los servicios. De hecho, la unión rutinaria de bienes y servicios representa en sí misma una herencia de la economía neoclásica. Esto no quiere decir que los servicios (sexuales, ocupacionales, rituales o emocionales) estén por completo fuera del dominio de la mercantilización en las sociedades no capitalistas. Sin embargo, solo en las complejas economías postindustriales los servicios constituyen un rasgo dominante e incluso determinante del mundo del intercambio mercantil. Con todo, un análisis comparativo profundo de la dimensión mercantil integrada por los servicios es una labor que el presente libro sólo puede estimular.

Empero, quizá el mejor ejemplo de la relación entre conocimiento y control de la demanda lo suministra el papel desempeñado por la publicidad en las sociedades capitalistas contemporáneas. Se ha escrito mucho acerca de este importante tópico, y en Estados Unidos existen signos de un renovado debate acerca de la efectividad funcional de la publicidad. En un reciente estudio ampliamente divulgado, Michael Schudson (1984) ha cuestionado

los análisis neomarxistas de la manipulación del consumidor mediante la publicidad. Señala que las imágenes textuales y gráficas producidas por la maquinaria publicitaria pueden considerarse una especie de "realismo capitalista", una forma de representación cultural de las virtudes del modo de vida capitalista, en lugar de concebirlas como técnicas seductoras de actos específicos de consumo. La adulación con que los publicistas han recibido este argumento constituye una fuente de dudas circunstanciales sobre la tesis en cuestión. Lo que sucede es que cualquier análisis decisivo de los efectos de la publicidad debe examinar las imágenes de la publicidad de acuerdo con las ideas cambiantes en materia de arte, diseño, estilo de vida y distinción, a fin de desenmarañar el papel desempeñado por este tipo de "realismo capitalista" en la movilización social de la demanda (Hebdige, 1983; Bourdieu, 1984).

No obstante, vale la pena incluir una observación acerca de la publicidad, la cual resulta pertinente en nuestra argumentación. Cualquiera que sea la efectividad de la publicidad para asegurar el éxito de un producto específico, parece cierto que los modos contemporáneos de representación en el campo de la publicidad (sobre todo la transmitida por televisión) comparten cierta estrategia. Esta consiste en tomar productos perfectamente ordinarios, producidos en masa, baratos e incluso de mala calidad, y presentarlos como artículos deseables-pero-asequibles (según la terminología de Simmel). Bienes del todo ordinarios se colocan en una especie de zona seudoaislada, si no estuvieran al alcance de cualquiera que pudiese pagar su precio. Las imágenes ampliamente sociales que crean esta ilusión de exclusividad pueden interpretarse como el fetichismo del consumidor, en lugar de aquel de la mercancía. Las imágenes de sociabilidad (pertenencia, atractivo sexual, poder, distinción, salud, fraternidad, camaradería) que subyacen a buena parte de la publicidad se centran en la transformación del consumidor, al grado de que la mercancía específica en venta es casi una idea tardía. Esta inversión doble de la relación entre las personas y las cosas puede considerarse la jugada cultural fundamental del capitalismo avanzado.

La relación entre conocimiento y mercancías tiene muchas dimensiones que no se han analizado aquí. Sin embargo, para nuestros fines, el aspecto esencial es este: en cuanto las mercancías viajan a mayores distancias

(institucionales, espaciales o temporales), el conocimiento acerca de ellas tiende a volverse parcial, contradictorio y diferenciado, pero esta diferenciación puede en sí misma (por medio de los mecanismos de contiendas de valor, autenticación o deseo frustrado) llevar a la intensificación de la demanda. Si concebimos el mundo de las mercancías como una serie cambiante de rutas mercantiles locales (reguladas por la cultura), advertimos que las políticas de desviación y enclave se vinculan con frecuencia a la posibilidad o la realidad de intercambios mercantiles con otros sistemas más distantes. En cada nivel donde un sistema pequeño interactúa con otro más grande, la interrelación de conocimiento e ignorancia sirve como un filtro, el cual facilita el flujo de ciertas cosas y obstaculiza el movimiento de otras. En este sentido, aun los ecúmenes mercantiles más grandes son producto de interacciones complejas entre los sistemas de demanda locales, políticamente mediados.

Conclusión: política y valor

Además de conocer cierta información moderadamente inusual y considerarla desde un punto de vista poco convencional, ¿existe algún beneficio general en concebir la vida social de las cosas del modo propuesto en este ensayo? ¿Qué aspecto nuevo nos ofrece esta perspectiva en relación con el valor y el intercambio en la vida social? ¿Qué sentido tiene adoptar la posición heurística de que las mercancías existen en todas partes y que el espíritu del intercambio mercantil no está divorciado por completo del espíritu de otras formas de intercambio?

Para responder estas preguntas no haré una revisión tediosa de las principales observaciones planteadas a lo largo de este ensayo, sino que iré directamente a la esencia de mi propuesta. Este ensayo partió de la perspectiva de Simmel, a saber, que el intercambio es la fuente del valor y no a la inversa. Los ensayos contenidos en este volumen nos permiten añadir una dimensión crítica a la intuición más bien abstracta de Simmel acerca de la génesis social del valor.

La política (en el amplio sentido de las relaciones, presupuestos y luchas concernientes al poder) es lo que une valor e intercambio en la vida social de las mercancías. Este hecho no es visible en los intercambios mundanos, cotidianos y a pequeña escala de las cosas que se verifican en la vida común, ya que el intercambio parece tan rutinario y convencionalizado como todos los comportamientos habituales. Sin embargo, estos abundantes tratos ordinarios no serían posibles si no fuese por un vasto conjunto de acuerdos relativos a qué es deseable, qué implica un "intercambio razonable de sacrificios", a quién está permitido ejercer qué tipo de demanda efectiva y en cuáles circunstancias. En este proceso, lo político no es solo el hecho de que significa y constituye relaciones de privilegio y control social, sino también la tensión constante entre las estructuras existentes (de precio, de regateo, etc.) y la tendencia de las mercancías a quebrantar dichas estructuras. Esta tensión se origina en el hecho de que no todas las partes comparten los mismos intereses en ningún régimen de valor específico, ni los intereses son idénticos para cualquiera de las dos partes involucradas en un intercambio determinado.

En la cima de muchas sociedades, tenemos la política de las contiendas de valor y de las desviaciones calculadas, que pueden llevar a nuevas rutas de flujo mercantil. En tanto expresiones de los intereses de las elites en relación con la gente común, se halla la política de la moda, de la ley suntuaria y del tabú, todas las cuales regulan la demanda. Sin embargo, como las mercancías rebasan de forma constante las fronteras de las culturas particulares (y, por tanto, de los regímenes específicos de valor), tal control político de la demanda siempre se ve amenazado por alteraciones. En una sorprendente variedad de sociedades, es posible presenciar la siguiente paradoja: a los detentadores del poder les interesa congelar completamente el flujo mercantil y crear un universo cerrado de mercancías y un conjunto rígido de regulaciones sobre el movimiento de estas. A pesar de ello, la naturaleza misma de la competencia entre aquellos que poseen el poder (o entre aquellos que aspiran a tener un mayor poder) tiende a provocar un relajamiento de tales regulaciones y una expansión del conjunto de mercancías. Este aspecto de la política de la élite es a menudo el caballo

de Troya de los cambios del valor. En lo que se refiere a las mercancías, el origen de la política es la tensión entre estas dos tendencias.

Hemos visto que la política en cuestión puede adoptar muchas formas: la política de la desviación y la ostentación; la política de la autenticidad y la autenticación; la política del conocimiento y la ignorancia; la política de la experiencia y el control suntuario; la política de la peritación y la demanda deliberadamente movilizada. Los altibajos de las interacciones e interrelaciones de estas diversas dimensiones de la política explican los caprichos de la demanda. En este sentido, la política es el vínculo entre los regímenes de valor y los flujos específicos de mercancías. A partir de Marx y los primeros economistas políticos, desaparecieron muchos misterios en torno a la relación entre política y producción. Hoy en día, estamos en una mejor posición para desmitificar la esfera de la demanda de la vida económica.

Referencias

Adams, F. G., e I. R. Behrman. (1982). *Commodity exports and economic development*. Lexington Books.

Alsop, J. (1981). *The rare art traditions: a history of art collecting and its linked phenomena*. Princeton University Press.

Azoy, G. W. (1982). *Buzkashi: game and power in Afghanistan*. University of Pennsylvania Press.

Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos*. Siglo XXI Editores. [Original de 1968].

Baudrillard, J. (1980). *El espejo de la producción o la ilusión del materialismo histórico*. Gedisa.

Baudrillard, J. (1989). *Crítica de la economía política del signo*. Siglo XXI Editores. [Original de 1972].

Benedict, B. (1983). *The anthropology of world's fairs: San Francisco's Panama Pacific International Exposition of 1915*. Scolar Press.

Benjamin, W. (1968). The work of art in the age of mechanical reproduction. En H. Arendt (ed.), *Illuminations* (219-223). Harcourt, Brace. [Original de 1936].

Bohannan, P. (1955). Some principles of exchange and investment among the Tiv. *American Anthropologist*, *57*, 60-70.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: a social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.

Braudel, F. (1984). *Civilización material, economía y capitalismo (siglos XV–XVII). Vol. 2: Los juegos del intercambio*. Alianza.

Breckenridge, C. (1984). *The subject of objects: the making of a colonial high culture*. [Inédito].

Campbell, S. F. (1983). Kula in Vakuta: the mechanics of keda. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new perspectives on Massim exchange* (201-227). Cambridge University Press.

Cassady, R., Jr. (1974). *Exchange by private treaty*. Oficina de Investigaciones sobre Comercio de la Universidad de Texas.

Chapman, A. (1980). Barter as a universal mode of exchange. *L'Homme*, *20*(3), 33-83.

Cochrane, G. (1970). *Big men and cargo cults*. Clarendon Press.

Cohn, B. S. 1996). Cloth, clothes, and colonialism: India in the nineteenth century. En *Colonialism and its forms of knowledge: the British in India* (106-162). Princeton University Press.

Collins, R. (1979). *The credential society: a historical sociology of education and stratification*. Academic Press.

Curtin, P. (1984). *Cross-cultural trade in world history*. Cambridge University Press.

Dalton, G. (1978). The impact of colonization on aboriginal economies in stateless societies. En G. Dalton (ed.), *Research in economic anthropology. Vol. 1* (131-184). JAI Press.

Damon, F. H. (1983). What moves the Kula: opening and closing gifts on Woodlark Island. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new perspectives on Massim exchange* (309-342). Cambridge University Press.

Dies, E. J. (1925). *The wheat pit*. Argyle Press.

Dies, E. J. (1975). *The plunger: a tale of the wheat pit*. amo press. [Original de 1929].

DiMaggio, P. (1982). Cultural entrepreneurship in nineteenth-century boston: the creation of an organizational base for high culture in America. *Media, Culture and Society*, *4*, 33-50; 303-322.

Douglas, M. (1967). Primitive rationing: a study in controlled exchange. En R. Firth (ed.), *Themes in economic anthropology* (119-147). Tavistock.

Douglas, M. y B. Isherwood. (1981). *The world of goods*. Basic Books.

Dumont, L. (1980). On value (conferencia sobre Radcliffe-Brown). *Proceedings of the British Academy*, *66*, 207-241.

Evans-Pritchard, E. E. (1976). *Brujería, magia y oráculos entre los azande*. Anagrama.

Firth, R. (1983). Magnitudes and values in Kula exchange. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new perspectives on Massim exchange* (89-102). Cambridge University Press.

Geertz, C. (1979). Suq: the bazaar economy in Sefrou. En C. Geertz, H. Geertz y L, Rosen, *Meaning and order in Moroccan society* (123-310). Cambridge University Press.

Geertz, C. (1980). Ports of trade in nineteenth-century Bali. En G. Dalton (ed.), *Research in economic anthropology. Vol. 3* (119-122). JAI Press.

Gluckman, M. (1983). Essays on Lozi land and royal property. En G. Dalton (ed.), *Research in economic anthropology. Vol. 5* (1-94). JAI Press.

Goldthwaite, R. (1983). The empire of things: consumer culture in Italy [ponencia en *Taller de Etnohistoria*, Universidad de Pensilvania, 10 de noviembre].

Graburn, N. H. H. (ed.). (1976). *Ethnic and tourist arts*. University of California Press.

Gray, J. N. (1984). Lamb auctions on the borders. *European Journal of Sociology*, *25*(1), 59-82.

Gregory, C. A. (1982). *Gifts and commodities*. Academic Press.

Gudeman, S. (1983). Rice and sugar in Panama: local models of change [ponencia en *Taller de Etnohistoria*, Universidad de Pensilvania, 6 de octubre].

Hart, K. (1982). On commoditization. En E. Goody (ed.), *From craft to industry: the ethnography of proto-industrial cloth production*. Cambridge University Press.

Hebdige, D. (1983). Travelling light: the route into material culture. *Royal Anthropological Institute News*, *59*, 11-13.

Hencken, H. (1981). The Peabody Museum acquired the Mecklenburg collection. En *Symbols* (2-3). Museo Peabody, Universidad de Harvard.

Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: conscience and history in a world civilization*. University of Chicago Press.

Hyde, L. (1979). *The gift: imagination and the erotic life of property*. Random House.

Leach, E. (1983). The Kula: an alternative view. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new perspectives on Massim exchange* (529-538). Cambridge University Press.

Leach, J. W. y E. Leach (eds.). (1983). *The Kula: new perspectives on Massim exchange*. Cambridge University Press.

Lears, T. J. J. (1981). *No place of grace: anti-modernism and the transformation of American culture, 1880-1920*. Pantheon.

López, R S. (1971). *The commercial revolution of the middle ages, 950-1350*. Prentice-Hall.

Malinowski, B. (1973). *Los argonautas del Pacífico Occidental: un estudio sobre comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica*. Península.

Marcus, G. (1985). Spending: the hunts, silver, and dynastic families in America. *European Journal of Sociology*, *26*(2), 224-259.

Marriott, M. (1968). Caste-ranking and food transactions: a matrix analysis. En M. Singer y B. S. Cohn (eds.), *Structure and change in Indian society* (pp. 133-171). Aldine.

Marx, K. (1975). *El capital, crítica de la economía política. Libro primero: El proceso de producción del capital*. Siglo XXI Editores. [Original de 1867].

Marx, K. (1978). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), 1857-1858*. Siglo XXI Editores.

Mauss, M. (1976). *The gift*. Norton.

Medick, H. y D. Sabean (eds.). (1984). *Interest and emotion: essays on the study of family and kinship*. Cambridge University Press / Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.

Miller, D. (ed.). (1983). Things ain't what they used to be. *Royal Anthropological Institute News*, *59*, 5-7.

Mintz, S W. (1980). Time, sugar, and sweetness. *Marxist Perspectives*, *2*(4), 56-73.

Mukerji, C. (1983). *From graven images: patterns of modern materialism*. Columbia University Press.

Munn, N. D. (1977). The spatiotemporal transformation of Gawa canoes. *Journal de la Société des Océanistes*, *33*(54-55), 39-53.

Munn, N. D. (1983). Gawan Kula: spatiotemporal control and the symbolism of influence. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new*

perspectives on Massim exchange (277-308). Cambridge University Press.

Nappi, C. (1979). *Commodity market controls: a historical review*. Lexington Books.

Nef, J. (1958). *Cultural foundations of industrial civilization*. Harper.

Perlin, F. (1983). Proto-industrialization and pre-colonial South Asia. *Past and Present*, *98*, 30-94.

Powers, M. J. (1973). *Getting started in commodity futures trading*. Investor Publications.

Price, J. A. (1980). The silent trade. En G. Dalton (ed.), *Research in economic anthropology, vol. 3* (75-96). JAI Press.

Sahlins, M. (1972). *Stone age economics*. Aldine.

Sahlins, M. (1976). *Culture and practical reason*. University of Chicago Press.

Sahlins, M. (1981). *Historical metaphors and mythical realities: structure in the early history of the Sandwich Islands Kingdom*. University of Michigan Press.

Schmidt, A. (1976). *El concepto de naturaleza en Marx*. Siglo XXI Editores. [Original de 1962].

Schudson, M. (1984). *Advertising, the uneasy persuasion: its dubious impact on American society*. Basic Books.

Seddon, D. (ed.). (1978). *Relations of production: marxist approaches to economic anthropology*. Frank Cass.

Simmel, G. (1957). Fashion. *American Journal of Sociology*, *62*(6), 541-558.

Simmel, G. (1978). *The philosophy of money*. Routledge.

Sombart, W. (1979). *Lujo y capitalismo*. Alianza. [Original de 1912].

Sraffa, P. (1965). *Producción de mercancías por medio de mercancías: preludio a una crítica de la teoría económica*. Oikos-Tau.

Stewart, S. (1984). *On longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection*. Johns Hopkins University Press.

Strathern, A. J. (1983). The Kula in comparative perspective. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new perspectives on Massim exchange* (.73-88). Cambridge University Press.

Swallow, D. (1982). Production and control in the Indian garment export industry. En E. Goody (ed.), *From craft to industry: the ethnography of proto-industrial cloth production* (133-165). Cambridge University Press.

Tambiah, S. J. (1984). *The buddhist saints of the forest and the cult of amulets*. Cambridge University Press.

Taussig, M. T. (1980). *The devil and commodity fetishism in South America*. University of North Carolina Press.

Thirsk, J. (1978). *Economic policy and projects*. Clarendon Press.

Thompson, M. (1976). *Rubbish theory*. Oxford University Press.

Uberoi, J. P. S. (1962). *Politics of the Kula ring*. Manchester University Press.

Weber, M. (1976). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Editorial Díez. [Original de 1904-1905].

Weber, M. (1978). Classes, status groups and parties. En W. G. Runciman (ed.), *Max Weber: selections in translation* (43-61). Cambridge University Press.

Weiner, A. B. (1983). A world of made is not a world of born: doing Kula on Kiriwana. En J. W. Leach y E. Leach (eds.), *The Kula: new perspectives on Massim exchange* (147-170). Cambridge University Press.

Wolf, E. (1982). *Europe and the people without history*. University of California Press.

33. Clasificar las mercancías: cómo se crea valor capitalista a través de los regalos*[1]

Anna Tsing

Resumen: Lejos de ser un sistema cerrado en sí mismo, el capitalismo es incapaz de crear la mayoría de las habilidades, relaciones y recursos que necesita para funcionar. La acumulación capitalista depende de la conversión de cosas creadas de diversas maneras, incluyendo la fotosíntesis y el metabolismo animal, en mercancías capitalistas. Así, las mercancías capitalistas adquieren valor utilizando —y obviando— las relaciones sociales, humanas y no humanas, no capitalistas. ¿Cómo se hace esto? Este artículo muestra la importancia de las prácticas de evaluación en la creación de valor mercantil a partir de formas de valor no capitalistas. La clasificación de hongos ofrece un ejemplo sorprendentemente claro, ya que los hongos prácticamente no cambian, salvo por la clasificación. Sin embargo, existen prácticas similares en muchas cadenas de mercancías. La alienación no puede darse por sentada; debe incorporarse a la mercancía.

Palabras clave: valor, cadena de mercancía, capitalismo, diversidad económica, distinción regalo-mercancía, alienación.

¿Cómo adquieren valor las mercancías? Con demasiada frecuencia, los antropólogos creemos conocer la respuesta a este problema antes de empezar a investigar. En el capitalismo, decimos, las mercancías *definen* el sistema de valor. Esto significa que el valor de las mercancías no tiene

1 Publicado originalmente en: Anna Tsing, 2013, Sorting out commodities: How capitalist value is made through gifts. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 3(1): 21–43.
*N. de T.: Se advierte al lector que el presente capítulo incluye referencias cruzadas y expresiones que remiten a otros apartados del mismo volumen, las cuales se han mantenido para preservar la cohesión interna y el aparato crítico de la obra original.

misterio alguno. Se necesita una larga palanca para mover un objeto que se da por sentado. En este artículo, mi palanca artificialmente alargada es una versión de la idea de que "lo justo es lo parejo" del contraste antropológico entre regalos y mercancías. Mi argumento es sencillo: a pesar de todo el aparato de la propiedad privada, los mercados, el fetichismo de la mercancía y demás, sacar el regalo de la mercancía nunca es fácil. Es un trabajo que hay que repetir una y otra vez.

Imaginamos una lógica capitalista del valor que se ha apoderado del mundo. Este documento muestra, por el contrario, cómo el valor de la mercancía capitalista se crea en todas partes por medio del acceso a y la transformación de las relaciones sociales no capitalistas. El término marxista de "acumulación primitiva" es útil en extensión: el capitalismo no trasciende la acumulación primitiva, sino que sigue dependiendo de ella. Las mercancías capitalistas adquieren valor mediante conversiones de transacciones no capitalistas. El contraste antropológico entre regalos y mercancías —en su crudeza artificial— puede iluminar el proceso por el que las relaciones sociales no capitalistas pueden ser eliminadas de las cosas, haciendo posible el valor capitalista de la mercancía.[2]

Los antropólogos contrastan los regalos y las mercancías como íconos de distintos sistemas de creación de valor. Strathern parafrasea a Gregory: "Si en una economía de mercancías las cosas y las personas asumen la forma social de cosas, en una economía de regalos asumen la forma social de personas" (citado en Strathern, 1988: 134; cf. Mauss, 1954: 200; Graeber, 2001). Las mercancías capitalistas están desvinculadas de sus creadores y a merced de las transacciones del mercado. Las cosas se intercambian por cosas y, una vez intercambiadas, el intercambio y los pasos que condujeron

2 Mi discusión aquí se refiere de manera exclusiva a las mercancías moldeadas por el capitalismo; por tanto, defino las mercancías por la alienación que las constituye. Con ello sigo a Marx (1992 [1867]), cuya discusión de la mercancía renueva la curiosidad sobre las mercancías, mostrando cómo las conversiones entre dinero y mercancías alienadas hacen posible la acumulación. Es posible definir la mercancía de forma bastante diferente. Así, Appadurai (2012), por ejemplo, define mercancía como cualquier bien de cambio. Esto le permite eludir la especificidad del capitalismo para discutir las estrategias de manipulación en todos los intercambios, capitalistas o no. Siguiendo a Kopytoff (1986), Appadurai rechaza la distinción entre regalo y mercancía porque todo lo que se intercambia es una mercancía.

a él pueden olvidarse; la mercancía está disponible para su uso o para otras transacciones. Los regalos, por el contrario, se asemejan a las personas; aportan algo personal, atraen al receptor a un campo social y sirven de recordatorio continuo de la necesidad de reciprocidad. Así pues, animan sistemas de valor diferentes: el valor en un sistema de mercancías está en los objetos de uso e intercambio. El valor en un sistema de regalos reside en las obligaciones sociales, las conexiones y los vacíos.[3]

El objetivo de este contraste es aclarar las lógicas sociales por medio de la abstracción. Unirse a esta discusión es entrar en el espíritu del juego analítico, preguntándose qué se puede aprender mediante la dicotomía. Las relaciones de intercambio existentes en la realidad son, por supuesto, mixtas y desordenadas. No solo conviven regalos y mercancías, sino que también incorporan características de los demás, se transforman unos en otros, o confunden a los distintos participantes sobre su identidad de regalo frente a mercancía. Además, constantemente se están creando nuevos tipos de mercancías, lo que redefine la categoría (cf. Foster, Ortiz y Dalsgaard en este número). Sin embargo, nada de esto impide utilizar el contraste regalo-mercancía para reflexionar sobre el valor.

La mayoría de las veces, los antropólogos utilizan el contraste para explorar las cualidades distintivas de los regalos, con la mercancía como lámina de contraste. Las mercancías capitalistas conocidas son los no-regalos que no necesitan más exploración; la mercancía se estira para los propósitos del contraste.[4] Aquí, ensayo lo contrario: mi objetivo es desfamiliarizar las mercancías capitalistas y mis regalos serán no-mercancías, deformados para el contraste.[5]

---

3 Muchos antropólogos, por supuesto, no aceptan esta distinción. Véase nota 1.

4 Incluso los analistas que rechazan la contraposición regalo-mercancía utilizan la mercancía capitalista como una lámina de contraste para explorar las relaciones sociales no capitalistas (por ejemplo, Comaroff y Comaroff, 1990).

5 Ton Otto y Rane Willerslev me han alertado de la existencia de una interesante bibliografía, en particular sobre Siberia, que muestra cómo los intercambios entran y salen de las categorías que podríamos denominar regalo, tributo, comercio y trueque (Ssorin-Chaikov, 2000) —y cómo se pueden utilizar técnicas de "montaje" para hacerse un0a idea de estos intercambios fragmentados en sus perspectivas— (Willerslev y Ulturgasheva, 2007).

Mis regalos incluyen todos los objetos de intercambio en los que se incrustan partes del dador, extendiendo las relaciones sociales más allá de la transacción. Así pues, la enseñanza, incluso asalariada, es un regalo si el profesor establece una relación de tutoría con el alumno que va más allá de la clase. Utilizando esta definición, muchas mercancías en proceso de fabricación tienen una vida como regalos. Sin embargo, si canalizan beneficios hacia la clase propietaria —es decir, si se convierten en mercancías *capitalistas*—, se les debe despojar de su ser regalo.

Este ensayo explora un aparato común para purificar las mercancías en el capitalismo contemporáneo: la introducción del trabajo de evaluación en la cadena de mercancías. La evaluación puede hacer varias cosas en la conversión de los sistemas de valor. Permítanme denominar "evaluación de la alienación" a las formas de evaluación diseñadas para bloquear las relaciones sociales similares al regalo. Este tipo de evaluación funciona no tanto por sus categorías conceptuales —el centro de la mayoría de los debates sobre la evaluación— sino más bien por la incorporación de trabajadores de la evaluación que no saben nada de los regalos que han dado lugar a las protomercancías que evalúan. Su presencia cambia los términos de la siguiente serie de intercambios: se olvidan las promesas anteriores plasmadas en las cosas.

¿Por qué, me he preguntado, se clasifican los hongos matsutake una y otra vez? Los matsutake son hongos silvestres gourmet de gran valor en Japón. El comercio internacional de matsutake lleva hongos frescos de bosques de todo el hemisferio norte a los consumidores japoneses. Solo los hongos de bajo valor se procesan antes de llegar a los establecimientos minoristas; los mejores se venden enteros y frescos a restaurantes y compradores particulares. Sin embargo, el matsutake cambia de manos muchas veces entre el bosque y los mercados minoristas; muchos comerciantes compran matsutake a lo largo de esta ruta. ¿Qué pueden hacer estos comerciantes, aparte de almacenar y transportar adecuadamente el matsutake? Su principal actividad es la evaluación —la clasificación de los hongos en categorías de valor—. En cada etapa de su viaje, los matsutake se vuelven a clasificar. Como los hongos no cambian mucho, un observador podría pensar: "¿No basta con una vez?". Sin embargo, la obsesión por la

evaluación sugiere que la clasificación es importante. ¿Es posible que la clasificación aporte valor al purificar los hongos *como mercancía*?

La clasificación de los hongos es la evaluación reducida a sus fundamentos. Nos permite considerar el papel de la evaluación en el valor de las mercancías de forma más general. Aunque las ideologías de transparencia del mercado y las tecnologías supuestamente neutrales ocultan su importancia, la evaluación está integrada en todas las cadenas de mercancía, desde el diseño hasta la comercialización. Pensar en la evaluación nos permite considerar cómo la forma de la mercancía puede fabricarse sin mano de obra industrial mediante un proceso de traducción.

La palabra *evaluación* en un ensayo académico no puede sino traer a la mente el régimen emergente de la evaluación de la alienación en la propia erudición, y un desvío momentáneo allí ayuda a mostrar lo que quiero decir. Incluso bajo la gestión neoliberal, la erudición apenas se ha convertido en un producto, pero el objetivo de los regímenes de evaluación orientados a las empresas ha sido aglutinar las cualidades similares a la propiedad en la investigación para convertir la erudición en una mercancía, al menos en potencia. Sin embargo, como sabe todo antropólogo, la investigación y la escritura están llenas de regalos. No solo el trabajo de campo: pensemos el taller para el que escribí este artículo. La mayoría de nosotros aceptamos la invitación por un sentimiento de obligaciones sociales incumplidas, la esencia de una economía del regalo. Además, cada uno de nosotros esperaba aprender algo en el fondo común intelectual de la discusión del taller. Otro aspecto de la economía del regalo es la incapacidad de privatizar las cosas en su totalidad, y si existe alguna idea privada por completo en antropología, no he oído hablar de ella. Sin embargo, el objetivo de los ejercicios de evaluación académica es avanzar en el proyecto de privatización borrando el espacio común del taller y las obligaciones sociales en las que se enreda, convirtiendo los trabajos individuales en puntos. La evaluación de la alienación privatiza y mercantiliza, interponiendo un proceso que es conscientemente ciego a las relaciones sociales constitutivas.[6]

6 Para un debate revelador sobre la auditoría académica, véase Shore y Wright (2000).

La importancia de la evaluación es evidente en particular en las formaciones capitalistas que dependen de las cadenas de suministro. Los capitalistas que controlan las cadenas de suministro racionalizan el inventario en lugar de disciplinar el trabajo y los recursos naturales en las fábricas y plantaciones. Pero sin cosas y trabajadores previamente disciplinados, es probable que el inventario se contamine con cualidades de regalo. En este contexto, la cadena de mercancía del matsutake no es solo una extrañeza, sino que, por el contrario, es ejemplar. Estos puntos merecen explicación.

El capitalismo de cadena de suministro

La cadena de suministro de matsutake ejemplifica los modelos contemporáneos de ganancia empresarial de dos maneras: utiliza contratistas independientes en lugar de trabajadores asalariados para el forrajeo de los hongos, y se nutre de la apropiación privada de recursos que antes eran públicos o comunes. Para explicar la importancia de estas características, es necesario analizar los modelos de negocio de la cadena de suministro (Tsing, 2009). Mi término *capitalismo de cadena de suministro* pretende ser un oxímoron útil para esta explicación. El término yuxtapone la exaltación de las elites empresariales, que defienden las "cadenas de suministro", y la angustia radical de los críticos, que nos muestran el "capitalismo" en lugar de los mercados. En esa yuxtaposición, localizo una serie de asombrosas disonancias con supuestos comunes.

Desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, el disciplinamiento de la mano de obra y los recursos naturales se consideró comúnmente como la tarea central de la expansión del capitalismo. Los críticos veían más violencia en el proceso que las elites empresariales, pero ambos coincidían en que el modelo de eficiencia y ganancia creado por la industrialización inglesa del siglo XIX dominaría el mundo. Este modelo dependía de la mano de obra gratuita —es decir, de trabajadores que solo podían ganarse la vida aceptando el salario de una fábrica—. Como no tenían otros medios de subsistencia, estaban dispuestos a aceptar la disciplina de la fábrica, convirtiéndose en máquinas en su relación con los productos que fabricaban. El cercamiento de los bienes comunes en la Inglaterra rural había producido una migración a las ciudades de esta mano de

obra dispuesta a trabajar. La disciplina fabril creó lo que Marx (1959 [1844]) denominó "alienación" —la separación del trabajador de las mercancías que producía—. La alienación definía las mercancías capitalistas, que idealmente no conservaban ningún elemento del involucramiento personal de los trabajadores cuando llegaban al mercado.

Incluso para las personas desplazadas sin medios independientes para ganarse la vida, la alienación nunca fue algo natural. Había que entrenar a la gente para la alienación. Este era el objetivo de los programas gubernamentales e industriales para la disciplina laboral. Incluso cuando estos programas eran más fuertes, la alienación nunca era completa. Los trabajadores seguían involucrados con su trabajo que, a pesar de la desespecialización, requería habilidades.[7] Sin embargo, había que crear una brecha entre el involucramiento de los trabajadores y el valor del mercado, porque solo esta brecha canaliza las ganancias a los dueños de las fábricas. Esta brecha se ha convertido en un problema mayor en el capitalismo de cadena de suministro, donde la disciplina del trabajo no es lo importante.

Desde finales del siglo XX, las elites empresariales han dejado de imaginar el control de los trabajadores, y la consiguiente expansión empresarial, como la clave del éxito. En su lugar, las empresas poderosas intentan deshacerse por completo de los trabajadores mediante la subcontratación y la externalización. Se han puesto de moda las cadenas de suministro en lugar de las empresas integradas de modo vertical. En una cadena de suministro, la disciplina se dirige hacia el inventario. La mano de obra y los recursos naturales son costos que deben reducirse encontrando a alguien dispuesto a ocuparse de estos asuntos por menos. Por lo general, esto significa encontrar trabajadores dispuestos a realizar el trabajo por razones distintas a los paquetes de salario y prestaciones. Estos trabajadores no encajan en el ideal de mano de obra gratuita. La violencia puede ser evidente en su reclutamiento, como cuando las mujeres migrantes se sientan en talleres cerrados con llave porque los contratistas de mano de obra les han quitado el dinero y los papeles. Pero también hay otro tipo de no libertad: la posesión de las propias habilidades y agenda de trabajo.

7 Satsuka (2015) desarrolló mi entendimiento de estas cuestiones.

(Recordemos que el trabajo libre se define no solo contra la coacción, sino también por la libertad de la capacidad de ganarse la vida de otro modo). Los contratistas independientes no trabajan por un salario, sino para sí mismos. Pueden considerarse empresarios, imaginando sus habilidades como "capital"; pueden aceptar contratos a pérdida porque están pensando en oportunidades potenciales. A diferencia de la mano de obra gratuita de la primera industrialización inglesa, los contratistas independientes son difíciles de separar de los productos de su trabajo. Sin alienación, los productos impulsan ulteriores relaciones sociales. Este es el problema que me interesa, y es un problema que ha plagado todo el capitalismo, pero es en particular evidente en el capitalismo de cadena de suministro, donde la contratación independiente es el modelo para toda la mano de obra.

Para los contratistas independientes, el suministro de mercancías tiene muchas cualidades similares a las de un regalo, ya que implica la extensión de la persona y sus relaciones sociales al producto. Incluso los obreros fabriles por excelencia, como los del sector textil y de la confección de China, pueden describirse a sí mismos como contratistas independientes en ciernes, que adquieren experiencia en la cadena de montaje con la esperanza de abrir sus propias tiendas. No hacen el trabajo por el salario, explican, sino por la experiencia (Lisa Rofel, comunicación personal; Pun, 2005). El espíritu empresarial se convierte en el sueño tanto de los pobres como de los ricos. Entonces ¿cómo se convierten en mercancías capitalistas —sin alienación laboral— las mercancías capitalistas?

La cadena de mercancía del matsutake es un ejemplo. En las secciones siguientes desarrollo tres puntos: en primer lugar, el forrajeo de hongos no es un trabajo alienado. Las empresas no pueden comprar la fuerza de trabajo de los buscadores de hongos. Los buscadores de hongos son independientes y acuden al forrajeo para sus propios fines. Cuando venden los hongos a los compradores, ofrecen una parte de sí mismos, lo que podría llamarse un regalo. De hecho, quizá el regalo sea la parte esencial de la transacción; la parte comercial queda a un lado. Al igual que los intercambios de brazaletes y collares anclan el *kula* de Melanesia, con las transacciones de cerdo y ñame al margen, los regalos de experiencia personal y la socialidad en elaboración mantienen unida la búsqueda

de matsutake. Pero entonces ¿cómo es esto capitalismo? Para cuando esos hongos llegan a Japón, un día después, son una mercancía capitalista ordinaria, ofrecida en subastas al por mayor y en negociaciones de supermercados con otras verduras. Sostengo que la transición entre los hongos recolectados y el inventario capitalista no puede darse por sentada; debería ser objeto de nuestra atención. En segundo lugar, el problema no es solo sacar a los buscadores de los hongos, sino también el bosque. Los productos forestales no madereros son notoriamente difíciles de controlar como propiedad privada, porque es imposible vigilar cada espacio forestal potencialmente aprovechable. Tanto si se legislan como si no, cualquier producto forestal no maderero tiene algo más que un tufillo a bien común. Si los hongos no son propiedad privada, ¿cómo pueden tener valor como mercancías capitalistas?

Esta pregunta revela otro rasgo distintivo del capitalismo de cadena de suministro. Las empresas de élite recurren a las cadenas de suministro para evitar la gestión no solo de la mano de obra, sino también de los recursos naturales. Las cadenas de suministro reducen los costos de gestión de los recursos naturales permitiendo a los proveedores poco regulados robar, rescatar o forrajear materias primas.[8] Así como la subcontratación y la externalización forman el componente laboral del capitalismo de cadena de suministro, el robo, la recuperación y el forrajeo forman el componente de los recursos naturales. El robo, la recuperación y el forrajeo se mezclan y combinan, y no solo en su contraste con los ideales del siglo xx. Los proveedores reducen sus costos aprovechando la privatización de lo que antes eran dominios comunes o públicos; tomar las materias primas de esos dominios es una especie de robo. Estos acuerdos plantean cuestiones urgentes sobre la propiedad privada como condición previa de las mercancías capitalistas. ¿Qué hace falta para convertir materiales

8 Otra forma característica de gestión de los recursos en el capitalismo de cadena de suministro es la "sustitución"; es decir, los materiales baratos sustituyen a los más caros. Pueden introducirse en los productos materiales venenosos o no probados; los escándalos de seguridad son el resultado previsible. Aunque no son irrelevantes para el matsutake, estas cuestiones quedan fuera del ámbito de este ensayo.

robados, rescatados y recolectados en mercancías? Las materias primas deben convertirse en mercancías privadas y, por tanto, inalienables.

En tercer lugar, a medida que los hongos avanzan hacia los consumidores, vuelven a convertirse en un regalo. Irónicamente, es justo cuando los matsutake llegan a manos de los importadores en Japón cuando la privatización y la alienación son más complejas. De lo contrario, sería difícil vender los hongos como un producto comercial. Sin embargo, para los consumidores japoneses, los matsutake son un regalo por excelencia, presentados para reafirmar una relación. Después de todo ese trabajo para convertir los hongos en una mercancía capitalista, vuelven a ser regalos. Así, el valor entra y sale de la forma de mercancía.

Las tres secciones siguientes de este ensayo aborda estos tres ámbitos: primero la mano de obra, luego la propiedad privada y, por último, el consumo. Los hongos tienen el mismo aspecto desde que se recogen hasta que se comen —y sin embargo, cambian para permanecer en la cadena—. Estos cambios son los que les confieren valor como mercancía. La clasificación es una buena forma de ver cómo funciona esto.

Un festival de la libertad

Cada otoño, en el centro de las montañas Cascade centrales de Oregon, en el noroeste del Pacífico estadounidense, cientos o miles de experimentados buscadores de hongos llegan para forrajear matsutake. Si compran un permiso, pueden forrajear y vender matsutake legalmente en cinco bosques nacionales colindantes. El servicio forestal estadounidense ha habilitado un rudimentario "*camping* industrial" con capacidad para cinco mil personas. Muchos también se instalan en *campings* privados, se amontonan en cuartos de moteles baratos o, si disponen de recursos, traen una autocaravana.

Cada mañana, al amanecer, los buscadores salen individualmente o en pequeños grupos al forrajeo de hongos. La mayoría regresa a sus campamentos a las cuatro de la tarde, y a las cinco, docenas de compradores han abierto tiendas a lo largo de la carretera. Los compradores compiten por atraer hongos. Los buscadores de hongos intercambian información entre sí sobre los precios; cuando

no les gustan los precios de nadie, a veces se retiran en masa, sentados en sus camionetas con sus hongos, a la espera de que suban los precios. Los precios cambian rápido, a menudo suben diez dólares por libra en una hora mientras los compradores compiten entre sí. Hacia las nueve y media de la noche, las compras terminan. Los compradores venden sus hongos a agentes de carga *in situ* que les ayudan a cargarlos en camiones para enviarlos a ciudades cercanas a aeropuertos. Los compran exportadores, muchos de ellos, con oficinas en Vancouver, British Columbia. A la mañana siguiente, los hongos deberían estar en un avión con destino a Japón para ser vendidos en subasta al por mayor o mediante negociación a compradores mayoristas de ciudades japonesas.

Los hongos pasan solo medio día en Estados Unidos después de ser arrancados del suelo. Durante ese tiempo, se clasifican al menos dos veces: una, cuando el comprador las recoge del buscador de hongos, y otra, en un almacén antes del envío por avión. ¿Por qué? No porque los compradores no sepan clasificar. Los compradores son *buenos* clasificadores. Clasificar bien los hongos es un acto de destreza; es la esencia del arte de comprar. Los compradores están orgullosos de su capacidad para clasificar con rapidez y precisión. Conocen los hongos: sin mirar, pueden sentir los daños causados por los insectos; pueden oler la procedencia del hongo. Ver a un comprador clasificar es asistir a un espectáculo. Sus brazos vuelan por las cajas de clasificación; es un baile lleno de concentración e intensidad. ¿Por qué hay que volver a clasificar los hongos nuevamente unas horas más tarde? Peor aún, la segunda clasificación la realizan trabajadores ocasionales aburridos y mal pagados que no saben nada de hongos. ¿Por qué?

Para responder a esto hay que profundizar en la escena social. Entonces, se puede ver cómo la primera clasificación, junto a los compradores de la carretera, anima una celebración de lo que los participantes llaman "libertad". Por medio de una clasificación dramática y competitiva, el intercambio de hongos y dinero reafirma el premio de la libertad, que los buscadores llevan consigo en el forrajeo de hongos del día siguiente y traen de vuelta a la compra dramática de esa noche. Por el contrario, la segunda clasificación, realizada por trabajadores ocasionales que no saben nada del forrajeo de hongos, desvincula a los hongos del rendimiento de libertad y rompe sus lazos sociales, transformando así los hongos en mercancías alienadas. Esta sección se centra en el desempeño de

libertad para que, cuando vuelva a la segunda clasificación, puedan verla como una transformación de valor. A su vez, para mostrarles la libertad, necesito disuadirles de sus prejuicios sobre el significado del término y presentarles las distintas agendas de libertad de los buscadores de hongos del centro de Oregon. En las tiendas de los compradores, sostengo, se yuxtaponen diversas agendas comunitarias de libertad, convirtiéndose en "objetos fronterizos" coconstitutivos (Star y Griesener, 1989). La libertad crea valor en el forrajeo de hongos tanto por su multiplicidad como por su exhibición pública interétnica en el *performance* de la compra.

Los buscadores de hongos de Oregon insisten en que vienen por sus propios motivos. No se trata de "trabajo", explican muchos. En su lugar, hablan de sus actividades como "libertad". *Libertad* no significa lo que los lectores pueden imaginar del término. No se trata de la "elección racional" individual de la economía neoclásica; tampoco es la "liberación" imaginada por la izquierda estadounidense. Para seguir a los buscadores de hongos hasta la libertad, hay que permitir que sea un término émico —es decir, una explicación local de lo que hacen los buscadores, no solo en el forrajeo, sino también en las tiendas de compra—.

Los buscadores de matsutake del noroeste del Pacífico tienen orígenes muy diversos. La mayoría son refugiados de Laos y Camboya que se trasladaron a Estados Unidos tras la guerra entre Estados Unidos e Indochina y las guerras civiles que la siguieron. Se unen a los estadounidenses blancos, una proporción importante de los cuales son veteranos de las mismas guerras. *Libertad* es la palabra clave en esa lingua franca por medio de la cual estos grupos tan dispares explican cómo coexisten en el bosque. El uso de la palabra *libertad* se basa en los privilegios estadounidenses compartidos por medio de diversas historias de anticomunismo.[9] Además, la libertad es el regalo que todo

9 Un número creciente de hispanoamericanos, sobre todo de México y Guatemala, está entrando en la cosecha de matsutake de Oregon. Vienen con apuestas diferentes en su totalidad. Para ellos, se trata de otra cosecha para llenar un ciclo anual de recolección, cuyos otros componentes están en campos agrícolas y huertos. Debido a que la dinámica social que une a los buscadores de hongos blancos y del sudeste asiático domina la escena actual, no hablo de los buscadores hispanos en este ensayo. Sin embargo, una forma de entender la prevalencia de los debates sobre la libertad entre blancos y sudasiáticos es como un intento de excluir a los indocumentados, como los hispanoamericanos, por referencia a las prerrogativas estadounidenses. La mayoría de los refugiados del sudeste asiático son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

el mundo necesita; se refiere a cómo los veteranos y los refugiados procesan las experiencias y los recuerdos de la guerra. Muchos de los buscadores de hongos tienen historias terribles que contar, historias de la guerra entre Estados Unidos e Indochina, y de la violencia que siguió. Muchos cuentan historias de guerra cuando les pregunto por los hongos; la guerra está en sus mentes todos los días. (Para una explicación más completa de las experiencias bélicas de los buscadores de matsutake y su papel en la motivación del forrajeo, cf. Tsing, 2013).

Las historias de guerra de los buscadores de hongos varían, uniéndose a lo largo de las líneas comunales que estructuraron el conflicto. Los refugiados del sudeste asiático no son un grupo unificado: tienen experiencias de guerra variadas como jemeres, laosianos étnicos, hmong y mien. Cada uno tiene una historia diferente de participación en la guerra. Además, sus relaciones con los veteranos blancos son tensas; los veteranos blancos tienen un conjunto por completo diferente de experiencias bélicas. El término *libertad* —en inglés— es una frágil negociación de la mismidad en medio de tales diferencias. Una forma de seguir a los buscadores de hongos en lo que ellos llaman "libertad" es considerar las agendas comunes para sobrevivir a la experiencia de la guerra a las que cada grupo se refiere por medio del término.

Los veteranos blancos de Vietnam buscan refugio en el bosque contra el estrés postraumático. Rick dice que fue francotirador de las Fuerzas Especiales en Laos y Vietnam. Cuando volvió a casa de la guerra, dice, era un "salvaje". Se incorporó al cuerpo policiaco, pero fue despedido por disparar seis veces a un sospechoso. Ahora vive en una autocaravana cerca del bosque de matsutake; al final de su entrada, ha colocado un letrero que dice que se disparará a los visitantes inesperados. Aunque Rick siempre fue amable conmigo, forma parte de una cultura rural blanca en la que se valora mucho la preparación armada y la capacidad de sobrevivir por uno mismo. Rick me contó que unos veteranos blancos, enfadados por la presencia de asiáticos del sureste en el bosque, habían matado a más de media docena. Esta información no fue confirmada por otras fuentes; aun así, sea cierta o falsa, alude a la ira no resuelta de muchos veteranos blancos. Al igual que otros veteranos que conocí, Rick explicó la libertad de los bosques como una experiencia

tanto aprendida en la guerra como contra la guerra. Otro veterano gritó por la noche y disparó contra la casa de su madre —por eso se fue al bosque—. Los *flashbacks* le dan pavor; busca la libertad del bosque.

Los refugiados mien ofrecen un significado muy contrastado de la libertad. Los mien eran cultivadores itinerantes en las colinas de Laos; atrapados en la guerra estadounidense, muchos terminaron en Tailandia y luego en Estados Unidos. Los buscadores de hongos mien añoran la vida en las colinas. Nai Fam me contó que se sentía atrapada en el abarrotado edificio de apartamentos en el que se había reasentado en California. Se fue al bosque buscando la libertad de la recordada vida de pueblo. Esta libertad también implica superar los recuerdos de la guerra, pero de forma muy distinta a como lo hacen los veteranos blancos. Nai Fam habló de intentar olvidar los terrores de la guerra en la sociabilidad de los campos de hongos. Los mien forman comunidades aldeanas en el bosque; esto, me explicaron, era la libertad. "Este es un buen lugar para vivir y un buen lugar para morir," me explicó otra mujer mien.

Los hmong difieren a su vez en su explicación de la libertad. Al igual que los mien, los hmong provienen de las colinas de Laos. Pero los refugiados hmong en Estados Unidos quieren recordar la guerra, no olvidarla. La experiencia de la guerra afirma su soberanía étnica (Tsing, 2012). Tong llevó a su hijo al bosque para enseñarle técnicas de sobrevivencia que había aprendido durante la guerra y para hablarle del legado que esperaba que se mantuviera. Los buscadores hmong tenían muchas historias de guerra y de sobrevivencia. "*Hmong* significa 'libre'", decían a veces los refugiados, y en esa libertad se entremezclan el orgullo étnico, los recuerdos de la guerra y las habilidades masculinas de supervivencia.

Los refugiados jemeres anhelan curarse de las guerras civiles de Camboya. La libertad, explicaron los refugiados jemeres, es el uso del propio cuerpo. Al igual que los mien, los jemeres contaban historias de las confusiones de la guerra; en lugar de preservar una narrativa de la guerra, como hacen muchos hmong, los jemeres esperan vivir más allá de ella. El suelo camboyano estaba sembrado de minas terrestres, y a algunos buscadores de hongos les faltan piernas. Otros vivieron las privaciones de la detención. Sida llegó a Estados

Unidos con las piernas debilitadas por la desnutrición y el agotamiento. Subrayó la importancia de ir de excursión por las montañas; gracias al forrajeo de hongos, había recuperado la salud. Esto, dijo, era la libertad.

Los refugiados de etnia lao eran soldados —o empresarios de guerra, espabilados en empresas fronterizas—. Por la noche, los laosianos organizan juegos de azar y abren tiendas de fideos en el bosque. Noy, hija de mujeres comerciantes de éxito, contó que escapó de Vientiane, la capital de Laos, cuando los negocios estaban regulados por el régimen comunista; para ella, la libertad es el derecho a hacer negocios. Aquí, la libertad adopta una forma tanto comercial como política. Kheung explicó por qué se fue a Estados Unidos en vez de a Francia: "En Francia tienen dos tipos, libertad y comunista, pero en Estados Unidos, solo tienen uno, libertad".

La libertad tiene distintos significados para participantes con distintas agendas comunitarias: puede ser libertad *para* la guerra o libertad *de* la guerra. Puede ser libertad para recordar o libertad para olvidar. Los buscadores de hongos recorren los bosques, siguiendo estas formas de libertad. Pero se reúnen como público en las tiendas de compra, donde los buscadores de todas las etnias llegan para vender sus hongos. En las tiendas de los compradores, la libertad adquiere nuevos significados, transfronterizos para todos. En el momento de la actuación del comprador, es también la libertad del dinero, de la competencia y de la economía de mercado. Es la libertad prometida por la intersección de la cultura política estadounidense y el capitalismo. La libertad de vivir el trauma en el bosque se une a la libertad de los dólares.

Las mujeres laosianas se cuentan entre las compradoras con más éxito. Muchas eran comerciantes experimentadas en la guerra y la frontera antes de llegar a Estados Unidos —o bien han aprendido de sus madres—. Sus maridos se sientan fuera de la tienda de compra, compartiendo historias de guerra y licor reforzado con tónica con los posibles vendedores de hongos. En la mesa de compra, las manos de las mujeres centellean mientras clasifican hábilmente hongos y calculan los precios. Los hombres laosianos presumen su destreza marcial, pero las mujeres saben comprar mejor.

Los otros compradores clave son hombres blancos, que realizan la clasificación con la agilidad y rapidez de un malabarista. Su concentración se ve favorecida por el hecho de que no custodian el dinero, que es manejado por una esposa o novia. Los compradores jemeres y mien también son hombres, con o sin ayuda femenina. Incluso los que rara vez tocan el dinero en efectivo están atentos a los precios. La destreza de la compra consiste en combinar el espectáculo de la clasificación con el espectáculo de los precios que cambian de continuo. Están entrelazados: la clasificación divide los hongos en categorías de precios. Los buscadores de hongos eligen a los compradores tanto por sus prácticas de clasificación como por sus precios básicos.

El objetivo de todo comprador es dejar fuera del negocio a los demás compradores manipulando los precios y las prácticas de clasificación para forzar la respuesta de los demás compradores. Subir el precio de repente, por ejemplo, obliga a otros compradores a subir sus precios y, con suerte, desde la perspectiva del instigador, a comprar demasiado a un precio demasiado alto. Los agentes de campo de los mayoristas son los actores centrales de esta acción; durante la compra, se dedican a manipular a la competencia. Aunque los compradores son independientes, los agentes de campo mayoristas adelantan a los compradores el efectivo que utilizan para comprar. De este modo, los agentes de campo dictan los precios, aunque los compradores suelen optar por perder o jugar dentro de los márgenes de sus posibles comisiones. Además, es habitual que los compradores utilicen el dinero adelantado por el agente de campo de un mayorista para comprar hongos y venderlos a otro mayorista. Así, tanto los compradores como los agentes de campo ven cada noche como un campo de batalla dramático y competitivo, en el que el objetivo es embaucar y engañar a tantos otros como sea posible, y salir con el premio. Se podría decir que es un "todos contra todos" y la libertad está en la mente de todos.

La compra es, por tanto, una representación de la libertad, una representación que reúne todos los tipos de libertad de las experiencias bélicas de los buscadores de hongos. Cuando los compradores clasifican los hongos, el dinero parece nacer como efecto de la libertad. A veces, los recolectores filman y fotografían ese momento en el que la clasificación

da como resultado dinero en efectivo, en especial si el dinero incluye billetes de cien dólares. La emoción no solo es que el dinero sirva para comprar otra cosa; al menos en ese momento, los billetes de cien dólares son trofeos de libertad que se pueden lucir. Tales trofeos son un regalo que, dicen los buscadores de hongos, crea una "fiebre" para volver a salir al forrajeo, para encontrar más hongos, volver a esa movilidad animada y al odio a los comunistas para verlos transformarse de un lado a otro en billetes de cien dólares.

La clasificación y la compra performativas son un momento de David Graeber (2001) en el que las cosas adquieren valor por medio de la acción pública. Pero lo que más se valora aquí es la libertad, que puede convertirse en muchas cosas.[10] Los hongos no carecen de importancia. Los buscadores y los compradores a veces me piden que fotografíe sus mejores hongos y parecen orgullosos sosteniéndolos para la cámara. Los mejores hongos son trofeos de libertad, junto con los billetes de cien dólares. La clasificación crea el valor de trofeo: el orgullo del forrajeo. El valor trofeo requiere que la experiencia de obtener la cosa permanezca en la cosa. El valor del trofeo es para el comprador como para el buscador. Los compradores siguen ponderando la belleza y abundancia de sus hongos cuando cierran las tapas de las cajas de plástico y las cargan en los camiones de los mayoristas. Sigue siendo un momento de empuje competitivo; el comprador podría vender a otro mayorista. La libertad sigue representándose de forma dramática y crea un campo de obligaciones y alianzas sociales abiertas. Los hongos envasados aún no son una mercancía capitalista, desvinculada del trabajo humano. Todavía extienden tentáculos relacionales —el régimen de valor de los regalos—.[11]

10 Una vez más, esta libertad no es individualismo, sino un conjunto de agendas políticas comunales parcialmente superpuestas, cada una de las cuales es fluida y responde a retos cambiantes.

11 En 2007, cuando se redujeron los precios, un comprador canadiense llamado T. C. se hizo filmar mientras pisoteaba sus hongos más caros como dramática protesta (Redshift 40, 2007). En el video, de modo alternativo sostiene los hongos para admirar su belleza y saltar sobre ellos, gritando: "Come hasta reventar, quienquiera que esté ganando dinero". Los hongos cargados de afecto aún no son mercancías alienadas.

El trabajo de los mayoristas es limpiar esos tentáculos antes de que puedan pasar a los exportadores que los enviarán a Japón como mercancías capitalistas, desprovistas de conexión con los buscadores de hongos que las encontraron. Este es, en mi opinión, el objetivo de la segunda clasificación, realizada a la luz fría de un almacén en las horas previas al amanecer. La mayoría de los trabajadores del almacén que vi eran empleados ocasionales sin ningún interés especial por los hongos. Permanecen tranquilamente en sus puestos para volver a limpiar, clasificar y empaquetar los hongos; aquí no hay dramatismo performativo. En Oregon, conocí a los *hippies* ecologistas blancos que buscan un poco de dinero extra. En Vancouver, conocí a amas de casa migrantes de Hong Kong que hacían el mismo trabajo. Son personas que no quieren compromiso laboral. No les importan los hongos. Su práctica de clasificación separa los hongos de los buscadores. Ya no son un trofeo de libertad, los hongos están listos para la exportación.

"Pero", los imagino diciendo, "¿por qué no pueden los mayoristas enviar los hongos, con tentáculos y todo? Seguro que habrían desaparecido cuando llegaran a Japón". Los importadores japoneses vuelven a clasificar los hongos, así que no se trata solo de un control de calidad. Permítanme volver, por un momento, a los académicos. Somos expertos en clasificar; llegamos a serlo por nuestra capacidad de distinguir entre un ensayo brillante y un fiasco. Nos apropiamos de la erudición y sus dones gracias a esta destreza. Se necesitan máquinas burocráticas de evaluación, dirigidas por técnicos desinteresados, para arrebatarnos nuestra propiedad, devolviendo la erudición a los protocolos de *ranking* de las universidades. Los acopiadores de matsutake son hombres de negocios dispuestos a situarse entre los exportadores atados a las convenciones económicas japonesas y los compradores comprometidos con una economía local estadounidense de regalos y trofeos de guerra y libertad. Contratan a agentes de campo que se unen a la refriega entre compradores. Entre los agentes de campo y los exportadores, deben transformar los hongos en una mercancía de exportación aceptable. Tienen que reconocer lo que envían y representarlo ante los exportadores. La reclasificación les ayuda a *conocer* los hongos.

Un detalle ilustrativo. Es ilegal recoger, comprar y exportar matsutake muy pequeños, conocidos en el noroeste del Pacífico como "bebés". La razón es que el mercado japonés no está interesado, aunque las autoridades estadounidenses afirman que la conservación guía la normativa.[12] Los buscadores de matsutake los recogen de todos modos, y los compradores afirman que los buscadores les obligan a comprar hongos pequeños.[13] Los mayoristas retiran los bebés en su clasificación extra. Como los hongos son pequeños, dudo que esto suponga una gran diferencia de peso. Las autoridades estadounidenses nunca revisan si hay bebés en las cajas de exportación. Pero descartar a los bebés ayuda a que los hongos se ajusten a los estándares de mercancía. Al dejar de estar enredadas en el intercambio de libertad entre buscadores y compradores, los hongos se convierten en mercancías de un tamaño y calidad determinados.[14] Están listos para usar o intercambiar.

Privatizar las cosas

Del otro lado del mundo, en las montañas centrales de Yunnan, China, el matsutake también está llegando a Japón. Aquí, paso del trabajo a la propiedad: la privatización está de moda en China y los bosques no han quedado libres. En la prefectura autónoma de Chuxiong Yi, los bosques se han dividido entre las familias, cada una responsable de su gestión.[15] Sin embargo, privatizar los bosques no es tan sencillo como dictar una nueva política. Los bosques arrastran capas más antiguas de colectivización y uso común. El matsutake depende de estas capas, incluso cuando se han convertido en un pilar de la nueva economía empresarial. Este es

12 Si todos los hongos se recogen antes de que maduren sus esporas, no hay razón —en términos del éxito reproductivo del hongo— para privilegiar a los bebés. Algunos defensores de la política imaginan que se perderán algunos hongos más, o que se las comerá la fauna silvestre.

13 Los bebés se clasifican convencionalmente en el grado 3 (de 5), aunque los mayoristas a veces intervienen para que unos pocos entren en la caja "número 1", más cara.

14 Los compradores en las Cascades centrales clasifican el matsutake según su madurez en cinco categorías de precio; los mayoristas vuelven a clasificar por tamaños. Los hongos exportados se envasan por tamaño y grado de madurez.

15 No se trata de propiedad privada en el sentido estadounidense. Los bosques pertenecen al Estado, que los contrata a los hogares.

un lugar para buscar cómo el trabajo de evaluación puede privatizar las cosas —es decir, crear la propiedad privada que es la condición previa para una mercancía capitalista—.

Las montañas del centro de Yunnan no solo son famosas por el matsutake, sino también por los experimentos de tenencia forestal que hacen de esta zona el orgullo de académicos y funcionarios orientados a la política (Yang *et al*., 2007; Yan *et al*., 2009). Aquí, afirman, la privatización es un éxito. En otros lugares, los aldeanos acuden en masa a los bienes comunes para forrajear el matsutake, lo cual crea una situación caótica que no puede ser buena, alegan, ni para la economía ni para la conservación. En la zona de Chuxiong, los bosques de matsutake se han dividido. Cada familia es libre de recolectar su propio matsutake o contratarlo a otra persona. Muchos aldeanos celebran subastas para asignar los derechos sobre el matsutake en los bosques de todos sus miembros. La subasta proporciona unos ingresos garantizados a cada hogar. El ganador de la subasta, por lo regular un miembro de la aldea o pariente, recoge y vende todos los hongos, y se lleva la ganancia. Según sus defensores, este sistema promueve tanto el bienestar social como el progreso individual. Algunos piensan que también es bueno para la conservación.[16]

No es mi objetivo demostrar que estos defensores están equivocados. Lo que me interesa es lo que conlleva privatizar las cosas, y no hay mejor lugar para buscarlo que un experimento modelo de privatización, porque aquí hay una contradicción: aunque estén privatizados, los hongos dependen de capas más antiguas de uso comunal. Para explorar esto, debo contar una historia sobre la sociabilidad más-que-humana. Las relaciones sociales no capitalistas de las que depende el comercio capitalista incluyen a actores no humanos.

Los matsutake son fundamentalmente criaturas sociales. Como hongos micorrícicos, forman órganos conjuntos con las raíces de los árboles para nutrirse y favorecer su crecimiento. Los matsutake establecen relaciones

16 La privatización permite a los propietarios o a sus contratistas esperar hasta que los hongos tengan el tamaño adecuado para el mercado antes de recogerlos. Esto aumenta los precios y es bueno para los exportadores. Esta práctica también conserva los hongos bebés, comentada con anterioridad.

sociales —pero no con cualquier árbol del bosque—.[17] Los matsutake se asocian con los árboles en lugares donde no hay nutrientes disponibles; si hubiera demasiados nutrientes, los árboles podrían rechazarlos, u otros hongos podrían ocupar su lugar. Para crear un bosque de matsutake, hay que retirar el humus rico. Quien lo retira puede ser un glaciar, un derrumbe o un volcán, pero a menudo es un humano, o al menos un proyecto humano. A los matsutake les gustan los bosques alterados por los humanos, y Yunnan (como Oregon) es un buen lugar para encontrarlos.[18]

Los agricultores de la región que describo utilizan los bosques para una serie de fines que lo perturban, manteniendo la arquitectura abierta y las relaciones roble-pino-suelo mineral favorecidas por el matsutake. Los agricultores utilizan los árboles para construir casas. Los productos forestales no madereros son asimismo valiosos. Hay cabras que pastar. Hay leña que recoger.[19] Hay agujas de pino que rastrillar para el lecho de los cerdos; una vez que están cubiertas de heces, las agujas de pino se trasladan a los campos, donde fertilizan los cultivos. Las hojas se recogen para abono verde. Las piñas se recogen para obtener semillas, y el polen de pino se destina para la industria cosmética. También se recolectan plantas medicinales —y muchísimas especies de hongos—.[20] Dentro de toda esta actividad económica, el matsutake es el artículo más valioso. Cuadros del matsutake adornan las paredes de las casas de las aldeas, proclamando que este es su producto más importante. El matsutake es el producto estrella de las políticas de privatización forestal.

He aquí, pues, la paradoja inicial de la privatización del matsutake: los bosques de matsutake necesitan las perturbaciones humanas. No pueden sobrevivir a la destrucción del bosque, pero necesitan las perturbaciones

17 En Yunnan, el matsutake se empareja tanto con pinos como con árboles parecidos a los robles (por ejemplo, *Lithocarpus* y *Castonopsis*, así como *Quercus*).

18 Mis conocimientos sobre la ecología forestal del matsutake se basan en fuentes japonesas (por ejemplo, Ogawa, 1991). La ecología de las perturbaciones es menos común en Yunnan, donde los expertos regionales suelen preferir la conservación basada en la exclusión humana promovida por Estados Unidos.

19 Todos los días se necesita leña para cocinar el alimento de los cerdos.

20 Las autoridades afirman que seiscientos mil personas de Yunnan viven, al menos en parte, de los hongos silvestres.

para mantener el bosque abierto y evitar que se acumule el humus. Sin embargo, el objetivo de la privatización del matsutake es evitar las perturbaciones para que solo el contratista que ganó la licitación tenga acceso a la propiedad.

La resolución que encontré es bastante sencilla: sin aviso oficial, el bosque se abre estacionalmente al uso comunal. Durante la temporada del matsutake, el bosque se mantiene cerrado. El propietario del bosque o el contratista pinta señales en los árboles limítrofes para indicar que nadie debe entrar. El resto del año, lo utilizan las personas que acostumbran emplear el bosque. Aunque no se informa a los funcionarios ni a los expertos, los aldeanos acuden con sus cabras y sus cestas de recogida y sus rastrillos; se llevan leña, piñas y agujas de pino. Mantienen las perturbaciones que facilitan la presencia del matsutake. Así, las relaciones sociales de los bienes comunes hacen posible que los contratistas privados cosechen matsutake.

Pero esto también significa que el matsutake nunca es tan privado como les gustaría a los comerciantes de la parte final de la cadena de mercancía. La larga historia de usos colectivos y comunales del bosque es parte de los hongos. Esto es más claro, quizá, en los hongos que nunca llegan a los contratistas. Los contratistas contratan guardabosques, pero estos nunca consiguen mantener alejados a los furtivos —aldeanos que conocen cada rincón del bosque—. A los contratistas les preocupa que los propios guardas (a menudo parientes, sin duda aldeanos) practiquen el forrajeo furtivo. No es fácil mantener los hongos bajo control.

Incluso los hongos forrajeros y vendidos por el contratista llevan demasiada historia. Hay que tener en cuenta que el contratista es un hombre importante en su aldea. Los contratistas admiten que, por deferencia, nadie puja seriamente contra ellos en las subastas de la aldea por los derechos de matsutake. Algunos contratistas son comerciantes de matsutake; otros son socios cercanos. Los comerciantes, considerados *laoban*, o "jefes", son íconos del éxito. Los contratistas y comerciantes locales gozan del respeto en relaciones de parentesco y patronazgo con una larga historia en diversas formas de esfuerzo colectivo, tanto patrocinadas por el Estado como de otro tipo.

Los contratistas y comerciantes establecen relaciones personales con sus clientes, que trascienden las transacciones individuales en una lealtad a largo plazo. En mi zona de investigación, el parentesco común, así como la etnia y lengua yi, construyen una relación que la gente describe como "confianza". Así es como llegué a comprender una característica asombrosa —para mí— del comercio de matsutake en estas aldeas y pequeñas ciudades: el matsutake se entregaba sin negociar la calidad ni el precio.[21] Los vendedores recogen los hongos de los aldeanos, a menudo entregándoles dinero sin discutir. Los contratistas envían el matsutake al comerciante rural en el autobús. "El comerciante siempre nos da un buen precio," decía la gente.[22] En estas transacciones casi no se clasifican los hongos.

El contratista y el comerciante son figuras de la nueva economía de mercado. Encarnan el éxito local de la iniciativa empresarial privada. Pero del mismo modo que rescatan productos privados de los bienes comunales, al obtener sus mercancías también rescatan relaciones sociales de historias comunales y colectivas. Las anteriores prácticas estatales de adquisición de productos de la aldea sin relaciones de mercado constituyen un estrato relevante. Al establecer relaciones de patronazgo, los comerciantes y contratistas se benefician de relaciones estructurales de mediación que recuerdan a las relaciones históricas de tributo. Así, por ejemplo, los dirigentes de las aldeas del siglo XX canalizaban los productos agrícolas hacia el Estado. En este sistema, los productos locales no eran mercancías capitalistas porque llevaban el peso de la responsabilidad pública, no el beneficio privado. Los comerciantes y contratistas de matsutake rurales se basaban en esta historia, aunque la rechazan de forma categórica —pero, por tanto, sus productos aún no son privados en su totalidad—.

21 La dinámica que describo depende del mundo social y lingüístico común de los comerciantes y buscadores de hongos y de mi área de investigación. En las zonas tibetanas de Yunnan, la dinámica social es bastante diferente. La confianza no existe, ni siquiera en el primer nivel de compra (Michael Hathaway, comunicación personal).

22 Las relaciones de confianza van en ambas direcciones. Los comerciantes hablaron de confiar en los recolectores para fijar un precio adecuado cuando los conductores, al recoger los hongos, desconocían las condiciones del mercado.

¿Qué hace falta para privatizar unos bienes impregnados de obligaciones comunales? Los comerciantes del pequeño pueblo llevan su matsutake a una ciudad con un mercado de hongos diario. De camino a esos mercados, o dentro de ellos, todo cambia —se clasifican los hongos, muchos de los cuales han permanecido hasta ahora sin clasificar— se ven de pronto inmersos en una vorágine de transacciones y evaluación. Cada vez que los hongos cambian de manos, se clasifican. El experto micólogo David Aurora (2009), vio cómo el matsutake cambiaba de manos ocho veces en dos horas en un mercado de hongos de Yunnan. Yo también vi mucha acción. Puede que el comerciante acaba de clasificar el matsutake. Aún no ha pagado los hongos. Otro comerciante se acerca y quiere comprar. Selecciona de entre los hongos ya clasificados, el grupo de matsutake que se ajusta a sus necesidades.

Se trata de una clasificación diferente de la que vi en Oregon. No hay grados persistentes. En su lugar, cada comerciante clasifica los hongos que cree que pueden ocupar un nicho de mercado específico. La diferencia de Oregón tiene que ver con destinos potenciales. Casi todos los hongos de Oregon van a Japón. Existe un pequeño mercado nacional, principalmente para restaurantes y supermercados japoneses, pero el grueso de la clasificación obedece a categorías establecidas por los importadores japoneses. En cambio, en Yunnan hay demasiados hongos para el comercio japonés. Los japoneses no quieren todos esos hongos. Toman los que consideran mejores: botones grandes, frescos, jóvenes, de forma regular y pigmentación clara. El resto debe encontrar usuarios en China. El matsutake no es un alimento tradicional chino, pero la aclamación japonesa ha creado un gran revuelo y el matsutake se ha convertido en un manjar caro en los restaurantes y en un regalo lujoso e impresionante. Los matsutake en Yunnan se clasifican, pues, no solo para la exportación, sino también para diversos mercados nacionales. Algunos se envían a otras ciudades. Algunos van a parar a los mejores restaurantes y vendedores de regalos. Algunos encuentran acomodo en restaurantes menos exclusivos —hasta en comedores de barrio—. Otros pueden venderse con verduras por la calle. Los pequeños botones duros entran en el emergente mercado del matsutake congelado.

Los comerciantes siempre buscan nuevos nichos; todas esas clasificaciones forman parte del proceso. Los mejores hongos, para los estándares japoneses, se separan pronto: se llevan a las empresas exportadoras, que los clasifican de nuevo y rechazan muchos. Los rechazados vuelven a unirse a los hongos que no valía la pena enviar a los exportadores. Estos se clasifican de nuevo, ya que varios distribuidores buscan el nicho que podría ofrecer un precio para ese, o para aquel. La evaluación es un arte de inventar clasificaciones para las conexiones especializadas del mercado. El objetivo es la proliferación de nichos.

Casi ninguna clasificación, luego una ráfaga de clasificaciones: ¿Qué está pasando? En el municipio, los hongos siguen siendo comunales y públicos. La clasificación en el mercado los transforma y cambia su naturaleza. De pronto, son criaturas de nichos de mercado, listos para este o aquel comprador. La valoración del mercado obvia la procedencia del hongo en los bienes comunes y la comuna. Los hongos pasan a ser privados. Están listos para el comercio capitalista.

Vuelta al regalo

En los almacenes de los exportadores de Yunnan, los obreros vuelven a clasificar el matsutake destinado a Japón, asegurándose de que llegue como una mercancía privada conocida sólo por su tamaño, calidad y peso. En el almacén, los hongos se etiquetan por regiones de origen, pero cuando se envasan para Japón, ni siquiera esa información aparece en las etiquetas. La legislación japonesa exige que los alimentos importados se vendan por país de origen, no por región, porque esta última es un privilegio reservado para los productores japoneses. Para cuando los hongos han salido del almacén, los exportadores los han preparado para los estándares japoneses. Son inventario.

Sin embargo —¡abracadabra!—, a su llegada, los hongos (ya sean de Yunnan, de Oregon o de cualquier otro lugar) empiezan a convertirse de nuevo en regalos con su primera clasificación en manos de importadores y mayoristas. Desde el primer momento, la venta de matsutake está envuelta

en la creación y el mantenimiento de relaciones personales, y la importancia de tales relaciones se intensifica a medida que los hongos avanzan por la cadena hacia quienes los comerán. Por medio de la evaluación, los hongos adquieren cualidades relacionales; se les otorga el poder de crear vínculos personales entre las personas. Se trata de otro tipo de evaluación: crea el personalismo del *marketing* de élite. Ilustra otra forma en la que el capitalismo abarca relaciones sociales no capitalistas.

Los mayoristas venden matsutake mediante negociación o subasta a otro estrato de intermediarios —en la traducción al español se llaman 'mayoristas intermedios'— que a su vez los venden a minoristas como supermercados, tiendas de comestibles, restaurantes y posadas tradicionales. Los mayoristas no ofrecen productos como el matsutake de forma pasiva; su trabajo es poner en contacto a vendedores con posibles compradores. Un hombre que gestiona el matsutake en una casa mayorista explicaba: "Nunca duermo durante la temporada de matsutake". Cada vez que llega un cargamento, debe evaluarlo, supervisando la clasificación. Cuando se ha formado una opinión sobre la calidad y las características especiales del lote, llama a los compradores adecuados —los que podrían utilizar ese tipo de matsutake—. Es un casamentero, que utiliza la evaluación para encontrar cualidades relacionales particulares en los hongos, que a su vez los convierten en un complemento natural para determinados compradores. Ya ha dado a los hongos el poder de establecer relaciones: el poder de la calidad.[23]

Los mayoristas intermedios se empeñan aún más en emparejar. A diferencia de los mayoristas, que cobran una comisión por las ventas, no ganan nada si no encuentran la pareja adecuada. Cuando compran a los mayoristas, a menudo ya están pensando en un cliente concreto. Su habilidad, también, es la evaluación de la calidad, la característica que puede forjar relaciones. La excepción son los agentes que trabajan con supermercados, que se preocupan más por la cantidad y la fiabilidad que por la calidad. Los supermercados compran la mayor parte del matsutake de menor valor. Pero el matsutake fino

23 Mi entendimiento del "emparejamiento" del matsutake depende del sagaz análisis de Shiho Satsuka (comunicación personal).

es el dominio de las pequeñas empresas minoristas que compran a mayoristas intermedios, y sus relaciones influyen en todo el comercio. La evaluación es el ingrediente necesario de este sabor; permite a los vendedores ofrecer asesoramiento personal a los compradores —no solo vender una mercancía genérica—. El asesoramiento es el regalo que viene con el hongo, que va más allá del valor de uso o del valor de cambio.

Los mejores matsutake se venden en tiendas especializadas y restaurantes de lujo, que se enorgullecen de conocer a su clientela. Un comerciante explica que conoce bien a sus mejores clientes: sabe cuándo se acerca una ceremonia en la que se podría utilizar matsutake, como una boda o reconciliación de familia extendida. Cuando compra al mayorista intermedio, él también piensa ya en clientes concretos. Se pone en contacto con ellos para mantener una relación, no solo para venderles un producto. Hay un regalo en el matsutake incluso antes de que salga de la esfera de las mercancías.

También para los compradores individuales, el matsutake es un regalo. Es raro que alguien compre matsutake solo para satisfacer el deseo individual. El matsutake se compra para regalar a otra persona. Es un regalo costoso y debe comerse rápidamente, antes de que se estropee; a diferencia de una botella de licor, no puede pasarse a otro receptor. Esto lo hace aún más potente como regalo: es casi una coacción aceptar la relación que conlleva. Es imposible rechazarlo sin desperdiciarlo por completo. Esta es una de las razones por la que el matsutake a veces se describe como un soborno: obliga al receptor a aceptar la relación. A veces, los proveedores regalan matsutake a las empresas que les hacen pedidos. Es un regalo que confirma y exige compromisos a largo plazo. El matsutake siempre viene con ataduras.

Ese es el objetivo de una economía del regalo. El misterio estriba en cómo una mercancía ordinaria –que hasta hace poco era sólo un inventario –puede llegar a personificar el espíritu del regalo. La evaluación puede hacer este trabajo, del mismo modo que puede sacar el regalo de la mercancía. Los comerciantes japoneses evalúan el matsutake para devolverle el componente de regalo. No se trata del regalo de la libertad estadounidense ni de la comunalidad china, aunque se elijan hongos estadounidenses o

chinos.[24] El regalo que establecen los comerciantes japoneses es el regalo de la calidad, el cemento de las buenas relaciones.

¿Qué es entonces el capitalismo?

Acabo de argumentar que el matsutake es una mercancía capitalista que comienza y termina su vida como un regalo. Solo pasa unas pocas horas como mercancía plenamente capitalista: esas horas que pasa como inventario en cajas de envío en el asfalto y en el baúl de un avión. Pero son horas que cuentan. Las relaciones entre exportadores e importadores, que dominan y estructuran la cadena de suministro, se cimentan en la posibilidad de esas horas. Como inventario, el matsutake permite cálculos que canalizan las ganancias hacia estas empresas líderes, haciendo que el trabajo de organizar la cadena de mercancía merezca la pena desde su perspectiva. Esta es mi explicación de la clasificación repetitiva.

Da igual que me cuelguen por oveja que por cordero: esta situación no es única. A pesar del poder del capitalismo, *todas* las mercancías capitalistas entran y salen del estatus de mercancía capitalista. Esto se debe a que el disciplinamiento del trabajo y de los recursos naturales, que construye la alienación y la privatización en la mercancía, nunca es exitoso por completo. El capitalismo siempre necesita relaciones sociales no capitalistas para alcanzar sus objetivos. Esto es en particular obvio en el capitalismo de cadena de suministro, donde las empresas líderes ni siquiera intentan disciplinar el trabajo y los recursos naturales, lo que limita su disciplina al inventario.

Consideremos las grandes historias de éxito empresarial de nuestros tiempos: gigantes del inventario como Amazon y Wal-Mart. Estas empresas concentran todas sus energías en el inventario; todo lo demás solo facilita

24 Para desgracia del comercio chino y estadounidense, ni el matsutake de Estados Unidos ni el de China se considera fino por los conocedores japoneses. El matsutake estadounidense es una especie diferente y se le desprecia por ello. El matsutake chino se considera poco fiable por proceder de China. Es importante para el análisis que ni los recolectores ni los comerciantes de hongos chinos ni los estadounidenses tienen idea de lo mal valorados que están sus hongos en Japón. Los elevados precios inducen a los recolectores a pensar que sus hongos son los mejores. Este desconocimiento pone de manifiesto la desconexión entre las zonas de origen y los evaluadores finales, una desconexión incorporada a la cadena de productos por las múltiples evaluaciones.

el control del catálogo. Entre los críticos, son famosos por la promoción de acuerdos escandalosos, como el trabajo coaccionado y no remunerado, condiciones de trabajo similares a las de una prisión y un uso peligrosamente descuidado de las materias primas. En las tiendas de Wal-Mart, los empleados trabajan por salarios inferiores a los de subsistencia; los proveedores de Wal-Mart, obligados a bajar de continuo sus precios, recurren a prácticas laborales y ambientales cada vez más escandalosas (cf. Moreton, 2009; Ehrenreich, 2002; Lichtenstein, 2005). Lo que parece escandaloso aquí son las relaciones sociales no capitalistas, ya sean de esclavitud o de robo. Su condición escandalosa nos permite verlas; no se hunden en el estatus dado por sentado del disciplinamiento capitalista. Se trata de un momento conradiano de *El corazón de las tinieblas*, en el que el horror del funcionamiento de la mercantilización capitalista se hace patente (Conrad, 1999 [1902]). Nos damos cuenta de que las relaciones no capitalistas *constituyen* mercancías capitalistas. Están integradas en los "precios bajos de todos los días" de Wal-Mart. Mi argumento es que esta visibilidad nos muestra la condición ordinaria de la mercantilización capitalista: nunca es una forma pura, sino que siempre está entretejida con relaciones sociales no capitalistas. Las mercancías capitalistas son a un tiempo capitalistas y no capitalistas.

Es en el contexto de este argumento donde he ampliado el concepto de regalo para abarcar un campo bastante heterogéneo de formas de intercambio no capitalistas, pero por lo general no violentas. No siento la necesidad de convencerles de que la celebración de la libertad manchada por la guerra en las colinas de Oregón se analiza mejor como intercambio de regalos. Lo que está claro es que no se trata de un disciplinamiento capitalista. El hecho de llamarlo intercambio de regalos me permite hacer esta observación; en este sentido, me inscribo en la larga tradición antropológica de hacer que la dicotomía mercancía-regalo sirva para aclarar la lógica cultural. Asimismo, el estatus de tributo del matsutake en Yunnan central merece un análisis más matizado. Sin embargo, llamarlo intercambio de regalos abre una ventana a través de la cual ver el papel constitutivo de las relaciones sociales no capitalistas en la fabricación de mercancías capitalistas.

¿Qué intento decir sobre el capitalismo? El capitalismo requiere heterogeneidad económica; es la fuente de su éxito. Mediante la incorporación

de relaciones sociales no capitalistas, el capitalismo alcanza su fortaleza creativa como sistema. Sin embargo, esta incorporación no es algo acabado y bajo control, sino que es un problema cotidiano. El capitalismo se nutre de ella, pero también la debilita. El desorden del capitalismo es a la vez su fuerza y su vulnerabilidad.

En los últimos veinte años se ha hecho cada vez más popular entre los críticos imaginar el capitalismo como un sistema singular, cerrado y coherente, unido por una lógica cultural común. Este giro al holismo es sorprendente, dado que el holismo en otros ámbitos es impopular. Sin embargo, hay razones para ello. Para quienes siguen a Mauss en el estudio de las relaciones no mercantiles, como ya he dicho, el capitalismo es una lámina de contraste. La no problematización de la unidad del capitalismo evita que la lámina resulte abrumadora; no se trata de describir el capitalismo, sino de mostrar otras formas de ser. También hay razones para imaginar el capitalismo como una unidad cerrada para aquellos que *sí* lo describen. Describir el capitalismo como un todo es una forma de dirigir un ataque en su contra. Así, Michael Hardt y Antonio Negri (2000) identifican el "imperio" como una economía política global cerrada sin exterior. Tales planteamientos abrazan la unidad del capitalismo como una apertura estratégica a la oposición.[25]

En su empeño por mostrar cómo encaja el capitalismo en su conjunto, estos análisis pasan por alto los procesos abiertos en los que las contingencias históricas se entretejen torpemente en el capitalismo. Estas contingencias (re)producen no nada más lo de siempre, sino también los excesos, las pesadillas y las vulnerabilidades que los críticos deben aprehender si queremos abordar el capitalismo como algo más que un objeto de contemplación o rechazo. Para quienes nos sentimos maltratados por el continuo aumento de la desigualdad y la injusticia, y sin embargo

25 Asimismo, Harvey (2007) muestra el capitalismo como un todo coherente; al igual que Hardt y Negri (2000), pretende inspirar la resistencia contra este todo. Para quienes analizan la gobernanza neoliberal, como Nikolas Rose (1999), el sistema cerrado del capitalismo es la base desde la cual explorar y protestar contra nuevos modos de subjetividad.

abrigamos esperanzas de alternativas construidas mediante la colaboración y las alianzas, las contingencias del capitalismo nos dan esperanza.[26]

Que quede claro: no estoy defendiendo un análisis liberal de muchos capitalismos. El capitalismo es un sistema de conmensuración. Por eso es tan importante la evaluación para construir los eslabones de las cadenas de suministro. La evaluación ofrece una traducción que hace posible que los productos continúen a lo largo de la cadena. La traducción entre formas capitalistas y no capitalistas de sociabilidad es lo que hace del capitalismo un sistema. Sabemos que la traducción es una traición; el trabajo de evaluación borra los regalos. Pero el proceso es accidentado. Debe funcionar tan bien como para que las empresas líderes obtengan beneficios; por eso organizan estas cadenas. Pero eso no significa que no haya asperezas. Esas asperezas son un punto de partida para el trabajo político e intelectual.

Esto significa, entre otras cosas, que los antropólogos tienen un importante trabajo que hacer. Describir esas asperezas es tarea de etnógrafos —observadores dispuestos a dejarse sorprender por los detalles—. Si estamos dispuestos a darnos cuenta, el mundo está lleno de sorprendentes formas sociales. En el proceso también surgen nuevas formas etnográficas. Seguir las cadenas capitalistas a menudo requiere etnografía en múltiples sitios; el trabajo aquí descrito surge en el marco de experimentos de colaboración para hacerlo posible (Matsutake Worlds Research Group, 2009). Además, comprender plenamente la alienación en el proceso de mercantilización requiere prestar atención a los mundos vitales de especies no humanas. La etnografía multiespecie se une a la economía política en este campo emergente.

Aquí se abren posibilidades para nuevos tipos de atención etnográfica. Con demasiada frecuencia, nos dejamos llevar por la ortodoxia teórica y dejamos de fijarnos. Suponemos el éxito del disciplinamiento capitalista; el capitalismo, pensamos, rehízo el mundo en el siglo XIX, y ahora todo lo que tiene que hacer es avanzar como una locomotora sobre sus raíces. Con

26 Hay muchos estudiosos que desarrollan este punto de vista. Los relatos antropológicos sobre el trabajo femenino en las fábricas han prestado atención a las relaciones sociales no capitalistas en la formación de la mano de obra capitalista (por ejemplo, Ong, 1987; Rofel, 1999; Zavella, 1987). Los análisis del comercio femenino han puesto de manifiesto el papel de las relaciones sociales heterogéneas en la creación de los mercados capitalistas (Guyer, 2004). Para lo que está en juego, véase Gibson-Graham (1996).

demasiada frecuencia, los académicos solo quieren seguir a los ingenieros ferroviarios. El mundo no bien reflexionado que ayudaron a construir tiene mucha más curiosidad.

Reconocimientos

Este artículo existe gracias a muchos regalos. Luo Wen-hong, mi asistente de investigación en Yunnan en 2011, encendió mi entusiasmo por la evaluación gracias a sus conocimientos sobre cómo se ganan la vida con ella los comerciantes de matsutake. Michael Hathaway fue un colaborador maravilloso a lo largo de esta investigación, y todo lo que sé sobre Yunnan se lo debo a nuestras conversaciones. Mi investigación en Oregon no podría haber seguido adelante sin Hjorleiffur Jonsson y Lue Vang. En Japón, me apoyé en Shiho Satsuka, Lieba Faier y Miyako Inoue, que, como Michael Hathaway y yo, son miembros del Matsutake Worlds Research Group. Parte de la investigación ha contado con el apoyo del UC Pacific Rim Research Program y la Fundación Toyota. El trabajo de campo en Oregón tuvo lugar en temporadas de matsutake entre 2004 y 2008. El trabajo de campo en Yunnan se realizó entre 2009 y 2011. El trabajo de campo en Japón involucró viajes de investigación en 2005, 2006, 2008 y 2009. Mi agradecimiento a Michael Hathaway y Lisa Rofel por sus comentarios sobre un borrador anterior de este artículo.

Referencias

Appadurai, A. (2012). Commodities and the politics of value. En A. Appadurai, A. Marco, F. Neresini y R. Sassatelli, *The future as cultural fact: essays on the global condition* (9-60). Verso.

Aurora, D. (2009). The houses that matsutake built. *Economic Botany*, *62*(3), 278-290.

Comaroff, J. y J. Comaroff. (1990). Goodly beasts, beastly goods: cattle and commodities in a South African context. *American Ethnologist*, *17*(2), 195-216.

Conrad, J. (1999). *Heart of darkness*. Reprint of the signet classics edition, Electronic Text Center, University of Virginia Library. http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/ConDark.html. [Original de 1902].

Ehrenreich, B. (2002). *Nicked and dimed: on (not) getting by in America*. Henry Holt.

Gibson-Graham, J. K. (1996). *The end of capitalism (as we knew it): a feminist critique of political economy*. Blackwell.

Graeber, D. (2001). *Toward an anthropological theory of value: the false coin of our own dreams*. Palgrave.

Gregory, C. (1982). *Gifts and commodities*. Academic Press.

Guyer, J. (2004). *Marginal gains: monetary transactions in Atlantic Africa*. University of Chicago Press.

Hardt, M. y A. Negri. (2000). *Empire*. Harvard University Press.

Harvey, D. (2007). *The limits to capital*. Verso.

Kopytoff, I. (1986). The cultural biography of things. En A. Appadurai (ed.), *The social life of things: commodities in cultural perspective* (64-93). Cambridge University Press.

Lichtenstein, N. (2005). *Wal-Mart: the face of twenty-first-century capitalism*. The New Press.

Marx, K. (1959). *Economic and political manuscripts of 1844* (M. Mulligan, trad.). Progress Publishers. [Original de 1844].

Marx, K. (1992). *Capital: a critique of political economy* (B. Fowkes, trad.; vol. 1). Penguin Classics. [Original de 1867].

Matsutake Worlds Research Group. (2009). Strong collaboration as a method for multi-sited ethnography: on mycorrhizal relations. En M.-A. Falzon (ed.), *Multi-sited ethnography: theory, praxis, and locality in contemporary research* (197-214). Ashgate.

Mauss, M. (2000). *The gift: the form and reason for exchange in archaic societies* (W. D. Halls, trad.). W. W. Norton. [Original de 1954].

Moreton, B. (2009). *To serve God and Wal-Mart: the making of Christian free enterprise*. Harvard University Press.

Ogawa, M. (1991). *Matsutake no seibutsugaku [Biology of matsutake mushrooms]*. Tsukiji Shokan.

Ong, A. (1987). *Spirits of resistance and capitalist discipline: factory women in Malaysia*. State University of New York Press.

Pun, N. (2005). *Made in China: women factory workers in a global workplace*. Duke University Press.

Redshift 40. (2007, 21 de septiembre). World's most expensive mushroom (matsutake) stomp part 1[video]. YouTub. http://www.youtube.com/watch?v=_Z0AD6FwW-8

Rofel, L. (1999). *Other modernities: gendered yearnings in China after socialism*. University of California Press.

Rose, N. (1999). *Powers of freedom: reframing political thought*. Cambridge University Press.

Satsuka, S. (2015). *Nature in translation: freedom, subjectivity, and Japanese tourist encounters in Canada*. Duke University Press.

Shore, C. y S. Wright. (2000). Coercive accountability: the rise of audit culture in higher education. En M. Strathern (ed.), *Audit cultures: anthropological studies in accountability, ethics and the academy* (57-89). Routledge.

Ssorin-Chaikov, N. (2000). Bear skin and macaroni. En P. Seabright (ed.), *The vanishing rouble: barter networks and non-monetary transactions in post-Soviet societies* (pp. 345-361). Cambridge University Press.

Star, S. L. y J. Griesemer. (1989). Institutional ecology, "translations", and boundary objects: amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology. *Social Studies of Science*, *19*(3), 387-420.

Strathern, M. (1988). *The gender of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia*. University of California Press.

Tsing, A. (2009). Supply chains and the human condition. *Rethinking Marxism*, *21*(2), 148-176.

Tsing, A. (2012). Subcontracting sovereignty: the afterlife of proxy war. En S. Ben-Porath y R. M. Smith (eds.), *Varieties of sovereignty and citizenship* (93-120). University of Pennsylvania Press.

Tsing, A. (2013). Free in the forest: popular neoliberalism and the aftermath of war in the US Pacific Northwest. E Z. Gambetti y M. Godoy-Anativia (eds.), *Rhetorics of insecurity: belonging and violence in the neoliberal era* (pp. 20-39). New York University Press.

Willerslev, R. y O. Ulturgasheva. (2007). The sable frontier: the Siberian fur trade as montage. *Cambridge Anthropology*, *26*(2), 79-100.

Yang, X., A. Wilkes, Y. Yang, J. Xu, C. Geslani, X. Yang, F. Gao, J. Yang y B. Robinson. (2009). Common and privatized: conditions for wise use management of matsutake mushrooms in Northwest Yunnan Province, China. *Ecology and Society*, *14*(2), 30. http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art30

Yang, Y., T. Shi, Y. Bai, K. Su, H. Bai, L. Mu, Y. Yu, X. Duan, Z. Liu y C. Zhang. (2007). Discussion on management model of contracting mountain and forest about bio-resource utilization under natural forest in Chuxiong Prefecture. *Forest Inventory and Planning*, *3*, 87-89.

Zavella, P. (1987). *Women's work and Chicana families: cannery workers of the Santa Clara Valley*. Cornell University Press.

F2. CONSERVACIÓN

34. Ecología política de la conservación de la fauna salvaje en la zona del Monte Meru del Noreste de Tanzania[1]*

Roderick Neumann

Resumen: Los problemas de conservación de la fauna salvaje en Tanzania se examinan desde la perspectiva de la ecología política. El análisis es histórico y explora la creación de parques nacionales bajo el dominio colonial británico y el endurecimiento del control estatal sobre el acceso a los recursos a expensas de los derechos consuetudinarios. Se presentan ejemplos de la zona del monte Meru , en el noreste de Tanzania. Durante el periodo colonial, el debate político formal sobre los derechos a la tierra y los recursos se llevó a cabo sin la participación de los campesinos africanos. Tras la independencia, el Estado siguió ejerciendo el control sobre el acceso a los recursos de forma unilateral. Como los campesinos meru han quedado excluidos del proceso político formal, su único recurso para defender la pérdida de acceso a los recursos naturales son las formas cotidianas de resistencia, incluidas las alianzas de facto con cazadores furtivos comerciales y el "remoloneo" en lo que respecta al cumplimiento de las leyes de conservación. En consecuencia, las políticas actuales de conservación de la fauna salvaje en el monte Meru cuentan con escaso apoyo local y las poblaciones de fauna salvaje han disminuido en los treinta años transcurridos desde el establecimiento allí del Parque Nacional de Arusha.

Palabras clave: áreas protegidas de Tanzania, ecología política, conservación de la fauna salvaje, historia de la conservación.

---

1 Publicado originalmente en: Roderick Neumann, 1992, "Political ecology of wildlife conservation in Mt. Meru area of Northeast Tanzania", *Land Degradation and Rehabilitation*, *3*: 85-98.
*N de T.: Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentrodel texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

Introducción

Las áreas protegidas de Tanzania son la piedra angular de su estrategia de conservación de la fauna salvaje, pero, a pesar de haber reservado una cuarta parte de su territorio a parques y reservas nacionales, el país sigue siendo testigo de un precipitado declive de algunas de sus poblaciones de animales salvajes. A mediados de la década de los ochenta del siglo, la población de elefantes (Loxodonta africana) disminuyó más de 50%, y el declive continúa. Tras perder 98% del rinoceronte negro (Diceros bicornis) a causa de la caza ilegal, solo quedan unos cientos en Tanzania y la especie está al borde de la extinción.

Lo que a menudo se pasa por alto en los debates de los conservacionistas sobre las causas y las soluciones al declive de las poblaciones de animales salvajes es la volátil política de protección de la naturaleza en el África rural (Anderson y Grove, 1987: 6). La creación de parques nacionales es, en esencia, un proceso de reasignación que implica la introducción de nuevas estructuras sociales para controlar el acceso a los recursos naturales. Se trata, pues, de un proceso político. El carácter político de la protección de la naturaleza se minimiza, e incluso se niega, como demuestra el tono proselitista de la literatura conservacionista convencional sobre la historia de los parques africanos (Carruthers, 1989). Los defensores de la conservación, que hasta hace poco han sido los únicos autores de la historia de la conservación de la naturaleza salvaje en África, representan la creación de parques nacionales no como una lucha política sino moral. De hecho, la implantación de políticas de conservación de la fauna salvaje en el África colonial implicaba por lo regular que el Estado negara a una sociedad de campesinos y pastores privados sus derechos el acceso a los recursos tradicionales, a menudo dislocando prácticas de uso de la tierra y asentamientos enteros, lo que amenazaba la propia existencia de las comunidades (Turton, 1987; Arhem, 1985; Diehl, 1985; Kjekshus, 1977; Marks, 1984).

Para comprender el origen de las amenazas que se ciernen sobre la fauna salvaje y los parques, es preciso analizar la evolución histórica y la dinámica política de la política estatal de conservación, sobre todo en lo que respecta a los cambios en el control del acceso a los recursos. En este ensayo, basado en investigaciones realizadas durante 1989-1990, se examinan los problemas de

conservación de la fauna salvaje en los parques nacionales de Tanzania desde la perspectiva de la ecología política. Se muestra cómo un cuidadoso análisis de la turbulenta historia política del sistema de parques nacionales del país puede ofrecer ideas sobre las amenazas contemporáneas a la protección de la vida salvaje. El Parque Nacional de Arusha, en las tierras altas del noreste de Tanzania, ofrece ejemplos de los conflictos entre las aldeas campesinas y el Estado que surgen con la aplicación de las políticas de conservación. Se analizan las implicaciones de estos conflictos para la protección de la fauna salvaje.

La investigación que aquí se presenta no es un estudio ecológico per se, sino más bien un esfuerzo por utilizar el análisis económico, histórico y político para contribuir a la explicación de un problema ecológico.[2] En este caso, el problema es la reducción de la diversidad del ecosistema como consecuencia de la extinción local de especies. La antaño abundante población de rinocerontes, una importante especie ramoneadora en el ecosistema del Parque Nacional de Arusha, ha desaparecido del parque como consecuencia de la caza comercial ilegal. Aunque no se han publicado estudios empíricos que documenten su número histórico, a principios de la década de los sesenta se podían ver hasta diecisiete animales congregados en el parque. No se ha documentado públicamente ningún avistamiento desde principios de la década de los ochenta y los agentes de la conservación suponen que están extintos en la localidad.

¿Qué es la ecología política?

Con el aumento de la preocupación por los problemas ambientales en el tercer mundo, se ha producido un considerable debate sobre las causas de la devastación ecológica. En particular, geógrafos y antropólogos han defendido un enfoque crítico, denominado por lo común "ecología política", que se centra en las estructuras y procesos políticos, económicos y sociales que subyacen a las prácticas humanas que conducen a la degradación. Los autores que es-

2 El autor no pretende evaluar o valorar el impacto de la protección sobre el área protegida o los entornos adyacentes. Sin embargo, sí aborda cuestiones de gran importancia para quienes tratan de implantar y administrar medidas de control de la degradación del suelo y conservación de la fauna (N. del E. del original).

criben desde esta perspectiva suelen establecer sus argumentos en oposición a una o más de tres explicaciones interrelacionadas, que pueden denominarse sobrepoblación, irracionalidad económica e inadecuación tecnológica (Blaikie, 1985; Watts, 1985; Stonich, 1989; Hecht, 1985). En otras palabras, un punto de partida común es argumentar que la degradación ambiental no ha sido explicada de la forma adecuada, si es que lo ha sido, por estos factores, y que cada uno de ellos contiene importantes limitaciones epistemológicas. Los enfoques que atribuyen la causa de la degradación ambiental a la población, la irracionalidad económica o a la tecnología inadecuada, alega Painter (1987), suelen pasar por alto la dinámica social e histórica que subyace a los fenómenos de degradación ambiental.

Una vez que vamos más allá de la insatisfacción con muchas de las explicaciones predominantes de la degradación ambiental, se hace más difícil localizar un terreno común específico que se traduzca en una teoría reconocible. Los autores mencionados, en su mayoría, intentan comprender los problemas ambientales desde una perspectiva de economía política, aunque esta se define de forma tan amplia que todo lo "social" es potencialmente importante. Watts (1985), por ejemplo, considera que las "relaciones sociales de producción e intercambio" son fundamentales para comprender la degradación, al igual que Painter (1987: 165), mientras que Collins (1986: 1) identifica más específicamente "la tenencia de la tierra, las políticas crediticias, la escrituración y otros factores institucionales". Blaikie (1989) incluye los factores anteriores y añade consideraciones tecnológicas y conflictos en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Incluso si restringiéramos el examen a los que etiquetan de forma explícita su enfoque como "ecología política", no se facilita mucho la aclaración. Schmink y Wood (1987), seguidos de cerca por Bassett (1988), describen su marco de ecología política como "extraído de la perspectiva de la economía política" que "muestra la relación entre la producción de excedentes, la clase social, la función del Estado en la promoción de la acumulación privada y el papel de la ideología en el discurso público y la planeación del desarrollo". Stonich (1989: 73), sin entrar en detalles, explica que su trabajo, "al combinar la economía política con las preocupaciones ambientales, se sitúa más exactamente dentro de la perspectiva emergente denominada ecología política", aunque su análisis

parece especificar en última instancia las relaciones sociales de producción y la tenencia de la tierra como factores clave para explicar la degradación. Los geógrafos Blaikie y Brookfield (1987: 17), que han ofrecido una formulación detallada de la ecología política, describen su enfoque como una combinación de "las preocupaciones de la ecología y una economía política ampliamente definida" que hace hincapié en "una preocupación por el papel del Estado" y "acciones como la sicalidad, la política alimentaria, la política de tenencia de la tierra y la asignación de recursos". El peligro de adoptar una perspectiva de la ecología política es la posibilidad de incluir una miscelánea de factores sociales, cualquier combinación de los cuales puede emplearse, pero no necesariamente reproducirse, de un estudio a otro.

Sin embargo, hay tres áreas fundamentales de acuerdo entre los autores que pueden proporcionar una base sobre la que construir una perspectiva de ecología política. La clave de esta perspectiva es un enfoque "ascendente" (Blaikie, 1985: 82; Watts, 1985: 24), centrado en "los productores que trabajan la tierra" (Collins, 1986: 1) y en las fuerzas sociales inmediatas que influyen en sus prácticas cotidianas. Como explicó Watts (1985: 15), la perspectiva requiere "fundamentar la ecología en la *red de relaciones sociales* que vincula a los hogares de pastores y agricultores y los relaciona con entidades políticas y económicas más amplias". Además, esta noción de comenzar con un microenfoque de los usuarios de la tierra que existen en una red de relaciones sociales que los vinculan a estructuras políticas y económicas más amplias que se extienden más allá del lugar de la degradación de la tierra, se relaciona con una segunda área de acuerdo, que Blaikie y Brookfield (1987: 27) han denominado cadena de explicación. En otras palabras, hay niveles de explicación que pueden encontrarse a escala regional, nacional y mundial (Blaikie, 1989). Cualquier análisis desde la perspectiva de la ecología política debe rastrear las formas en que el comportamiento del usuario de la tierra se ve influido por estructuras sociales y procesos sociales que se extienden más allá de su entorno inmediato, incluso a escala global.

Una tercera área amplia del acuerdo es el énfasis en la importancia del análisis histórico para comprender el desarrollo de las relaciones sociales y sus posteriores vínculos con la degradación (Painter, 1987; Hecht, 1985).

Blaikie y Brookfield (1987: 100) explicaron así la especial importancia del análisis histórico para su perspectiva de ecología política:

> … nos pareció necesario avanzar no solo "hacia arriba" desde el gestor territorial hasta el sistema social y político, sino también hacia atrás en el tiempo para comprender los antecedentes de las condiciones modernas […] Si escribiéramos en términos de teoría de sistemas, podríamos considerar la degradación como una "respuesta mal adaptativa" al cambio histórico, una falta de adaptación a los hechos sociales cambiantes. En nuestro planteamiento de "ecología política regional" adoptamos el enfoque opuesto y hacemos hincapié en la causalidad social y económica.

Blaikie (1985: 119-137) se esforzó igualmente en explicar cómo el análisis del desarrollo histórico de la vinculación de una región a una economía política mundial nos ayuda a comprender la forma en que los cambios contemporáneos externos a un entorno local pueden influir en las prácticas de uso y conservación de la tierra. El estudio de Stonich (1989), que muestra cómo la expansión de la producción agrícola capitalista en Honduras después de la Segunda Guerra Mundial produjo cambios en los patrones de uso de la tierra y aumentó la concentración de la propiedad —una situación que actualmente obliga a los agricultores pobres a utilizar técnicas agrícolas perjudiciales para el ambiente—, ejemplifica la importancia del análisis histórico para la ecología política.

A pesar de la amplitud teórica de estos estudios, sigue habiendo un vacío en sus análisis. Es característico de esta literatura que el análisis que no profundice en el funcionamiento cotidiano de la política local, sino que siga centrándose en las estructuras políticas formales, a menudo en el plano interclasista. Por ejemplo, Blaikie (1985) abordó la cuestión de por qué los usuarios de la tierra pueden resistirse a las políticas estatales de conservación, pero no lo amplió para preguntarse de qué manera se resisten o qué opciones quedan abiertas para que los campesinos desafíen la autoridad del Estado o de las clases superiores. Bassett (1988) empezó a explorar algunas de las cuestiones políticas locales que rodean el acceso a los recursos, pero limitó su análisis a las estructuras formales. Por tanto, la arena política informal, en el nivel micro, en la que tiene lugar gran parte

de la defensa y la negociación sobre el acceso a la tierra y los recursos, permanece oculta en los estudios de ecología política.

En el nivel más elemental, una perspectiva de ecología política implica: (1) centrarse en los usuarios de la tierra y las relaciones sociales en las que se entrelazan; (2) rastrear los vínculos de estas relaciones locales con entornos geográficos y sociales más amplios, y (3) un análisis histórico para comprender la situación contemporánea. Los estudios que se originan desde esta perspectiva variarán sin duda en cuanto a las características sociales y económicas que surjan como importantes para explicar la degradación ambiental local. Puede tratarse de las condiciones comerciales de los productos agrícolas, la tenencia de la tierra, el control del acceso a los recursos o, lo que es más probable, una compleja combinación de varios elementos. Al adoptar la perspectiva aquí descrita, la investigación se desplaza hacia arriba y hacia afuera desde la posición del usuario de la tierra, lo que permite que los factores sociales y económicos más destacados surjan "orgánicamente" en situaciones concretas.

Ecología política de las amenazas a los parques nacionales

Por definición (IUCN, 1984) todas las actividades humanas (excepto el turismo y la investigación) están prohibidas en los parques nacionales, por lo que cualquier cambio ecológico antropogénico puede considerarse una forma de degradación. Varios autores han subrayado que la degradación ambiental, sea cual sea la forma concreta que adopte, es un término muy problemático (Watts, 1985; Blaikie y Brookfield, 1987). Han señalado que la degradación ambiental es extremadamente difícil de medir y que la propia afirmación de que se está produciendo degradación es un juicio muy subjetivo. Blaikie y Brookfield (1987: 6) sostienen que es necesario abordar de frente esta subjetividad y, después, definen la degradación como "una reducción de la tierra para satisfacer un uso concreto". La expresión de "amenazas a los parques nacionales" es asimismo problemática por las mismas razones. Neumann y Machlis (1989: 14) ofrecen una definición de "amenazas" como las condiciones ambientales que "entran en grave conflicto con los objetivos de la administración y gestión de los parques". Así se aborda la subjetividad inherente al término.

La extinción de especies locales y la disminución del número de animales salvajes son las amenazas específicas para el Parque Nacional de Arusha que se abordan en este ensayo. Los responsables de la naturaleza salvaje y del parque dan por hecho que se ha producido una extirpación del rinoceronte. Sin embargo, resulta problemático extraer conclusiones precisas sobre las demás poblaciones de fauna silvestre del parque. No se ha llevado a cabo ninguna investigación ecológica importante en el parque desde principios de la década de los setenta, cuando Vesey-FitzGerald estaba destinada allí como científico del Gobierno. Su estimación de la población de búfalos (*Syncerus cafler)* hace casi veinte años situaba su número en 1 800 (Vesey-FitzGerald, 1973), pero desde entonces no se ha realizado ningún estudio que indique si la población está aumentando o disminuyendo. Del mismo modo, en el caso de los elefantes, la otra especie rumiante importante, no existen estimaciones de población actuales, aunque las evaluaciones cualitativas (Thorsell, 1982) y la información anecdótica proporcionada por mis propias entrevistas con la población local que *sugieren* que su número, así como el de las eland (*Taurotragus oryx*), se ha reducido de forma considerable desde la creación del parque. Un estudio de la dinámica de la población de jirafas del parque (*Giruffa camelopardalis),* realizado en 1979-1980, concluyó que era probable que su número disminuyera (Pratt y Anderson, 1982). A pesar de la escasez de investigaciones ecológicas, existen pruebas sustanciales de que la extinción de especies locales y la disminución de la fauna salvaje están amenazando el ecosistema del parque.

Las interpretaciones predominantes de funcionarios del Gobierno y de conservacionistas sobre el origen de las amenazas a los parques de Tanzania son que la culpa la tienen la sobrepoblación y la ignorancia e irracionalidad de los residentes locales. Un informe de los Parques Nacionales de Tanzania, por ejemplo, advierte que "también existe una amenaza más implacable, y es el crecimiento del número de personas que habitan las aldeas de la periferia de los parques nacionales" (República Unida de Tanzania, 1986). El informe continúa insinuando que los residentes locales no comprenden el valor de la conservación, por lo que es necesario "educar a las masas de habitantes de las aldeas circundantes, enseñarles que la naturaleza salvaje tiene un papel importante que desempeñar en el patrimonio nacional". Desde el punto de vista de la ecología política, intento demostrar que esta interpretación es muy errónea y que utilizarla como base

para formular políticas de conservación es arriesgarse a fracasar y enfrentarse al declive de la biodiversidad dentro de los parques.

La evolución del sistema de parques nacionales de tanzania

Pocos temas son capaces de despertar pasiones tan violentas en el seno de personas por lo demás razonables como el de la conservación de la caza. [3] En 1928, poco después de su nombramiento, el primer guarda de preservación de la caza de Taganyica recomendó que el monte Meru, junto con el cráter del Ngorongoro y el Kilimanjaro, fueran designados parques nacionales, aunque todavía no existía tal designación en las leyes del África gobernada por los británicos. Sin embargo, la defensa más enérgica de la creación de parques en Taganyica no procedió de los profesionales de los recursos naturales de la colonia, sino de sociedades conservacionistas políticamente poderosas de Inglaterra. Un mes después de que el guarda de caza ofreciera su sugerencia, una carta confidencial enviada por el secretario de Estado al gobernador Cameron proporciona la primera documentación oficial en la colonia de un interés en la creación de un acuerdo internacional para proteger la naturaleza africana. Detrás de esta idea estaba un grupo conservacionista con sede en Londres, la Sociedad para la Preservación de la Flora y la Fauna del Imperio (SPFFE). En 1930, la SPFFE envió a Taganyica a un representante, el comandante Richard Hingston, para investigar las necesidades y las posibilidades de desarrollar un programa de protección de la naturaleza. El documento resultante de la visita subrayaba que "la piedra angular del informe es la recomendación relativa a la formación de una serie de parques nacionales sin demora" (SPFFE, 1931).

Un examen de las ideas de la spffe en ese informe sobre el carácter de los parques nacionales ilumina la base histórica del conflicto social contemporáneo asociado a estas áreas. Al buscar modelos, como era de esperar, hicieron referencia al Parque Nacional de Yellowstone, la primera área protegida de su clase en el mundo, y al Parque Nacional Kruger, de Sudáfrica. Cabe destacar que tanto el modelo estadounidense como el sudafricano prohibían

3 Comentarios del procurador general del Territorio Taganyica sobre la Ordenanza de Caza de 1940, Actas del Consejo Legislativo 14.a Sesión, parte IV, mayo de 1940, Archivo Secretarial TNA 27273.

los asentamientos humanos permanentes y las actividades económicas. Sin embargo, la política de creación de parques en las colonias impidió a la spffe adoptar una postura definitiva al respecto. Dejaban claro que los seres humanos no eran bienvenidos en los parques, pero admitían que, en el clima político imperante, la conservación "no puede llevarse hasta un punto en el que entre en grave conflicto con la felicidad material y el bienestar de la población nativa". Por último, en 1933 se celebró en Londres la Convención para la Protección de la Flora y la Fauna de África, cuyo resultado fue un acuerdo internacional que seguía casi al pie de la letra las propuestas de la SPFFE. La convención obligaba a todos los signatarios, entre los que se encontraba Taganyica, a investigar las posibilidades de establecer un sistema de parques nacionales.

Al parecer, el Gobierno de Taganyica se tomó muy en serio el acuerdo y propuso la designación del primer parque nacional en un área de 4 000 km^2 del Serengueti en 1937. Sin embargo, un examen minucioso de los registros históricos revela que los funcionarios coloniales eran, en el mejor de los casos, conservacionistas reacios, ya que diez meses antes de la propuesta, un técnico de Taganyica escribió que el Gobierno colonial se había "resistido a todos los intentos de crear un parque nacional".[4] A medida que aumentaba la presión de la spffe y de otros conservacionistas, las líneas de conflicto dentro del Gobierno colonial y de la sociedad europea en su conjunto se hicieron más nítidas. Por un lado, estaban los conservacionistas privados y los profesionales de los recursos naturales del Gobierno. Por otro lado, los funcionarios responsables de la administración de la colonia en su mayoría temían que las estrategias de los conservacionistas entraran en conflicto con los derechos de los africanos hasta tal grado que amenazaran la estabilidad política de la colonia. Temerosos de "dar rienda suelta a los fanáticos en estos asuntos",[5] se resistían a ver cómo los guardabosques y los guardas de caza ganaban poder en la colonia con el apoyo de los conservacionistas de la metrópoli. A. E. Kitching, oficial de distrito y más tarde comisario provincial, era un defensor especialmente declarado de los derechos africanos, como demuestran sus comentarios sobre las propuestas de parques nacionales del comandante Hingston:

4 Origen ilegible, dirigido al secretario ejecutivo, 11 de enero 1938, Archivo Secretarial TNA 12005.

5 D.M.K a D.C.S, notas sobre la Circular del Consejo Legislativo 17/2/37, Archivo Secretarial TNA 24979.

> Las recomendaciones de Hingston […] no tienen en cuenta los intereses de los nativos. Implican la enajenación a perpetuidad de miles de kilómetros cuadrados de tierra del territorio […] para "crear el mejor parque natural del Imperio". Las recomendaciones me parecen tan erróneas en principio que hacen innecesario cualquier examen detallado.[6] Funcionarios como Kitching, sin embargo, no estaban a la altura de los políticos de peso de la metrópoli que lideraban la campaña a favor de los parques nacionales.[7]

Bajo la creciente presión de Londres, el Gobierno de Taganyica intensificó la tramitación de la Ordenanza de Caza para el Territorio, pendiente desde hacía más de seis años. La ordenanza aprobada por el Consejo Legislativo en mayo de 1940 contenía una cláusula que declaraba el Serengueti el primer parque nacional del África colonial británica, aunque aún no se había resuelto la cuestión de los asentamientos humanos en el parque y se ignoraban las peticiones de una investigación completa de los derechos consuetudinarios dentro de los límites propuestos para el parque. En 1948, el Gobierno de Taganyica promulgó una Ordenanza de Parques Nacionales que reafirmaba la condición del Serengueti como un parque nacional y creaba una junta de supervisión independiente. La ambigüedad que seguía existiendo en la legislación del parque dejó sentimientos amargos a ambos lados de la cuestión de los derechos humanos y dio lugar a una prolongada batalla por el control de las tierras del parque. Los límites propuestos para el parque, rápidamente impugnados por los africanos que vivían cerca, no finalizaron hasta 1951. Ese año, el secretario de la nueva Junta de Supervisión del Parque Nacional del Serengueti aseguró al Gobierno que "la Ordenanza no afectaba a los derechos de los masai a ocupar y pastorear su ganado en el Parque", mientras que, casi al mismo tiempo, la dirección del parque empezó a intentar restringir sus actividades.[8]

---

6 Comentarios sobre el informe del comandante Hingston sobre una misión a África Oriental, 9 de abril 1931, Archivo Secretarial TNA 12005.

7 Por ejemplo, el duque de Devonshire, un miembro de la Cámara de los Lores, fue presidente de la SPFFE a inicios de la década de los cuarenta.

8 Por ejemplo, menos de una semana después del memorándum del secretario, el nuevo director del parque insistió en que se retirara de Ngorongoro el mercado de ganado de los masai porque "interfería con los servicios del parque" (Actas de la segunda reunión de la Junta de Supervisión del Parque Nacional del Serengueti, 23 de octubre de 1951, Archivo Secretarial TNA 10496).

Siguió casi una década de enfrentamientos abiertos, a menudo violentos, entre las autoridades del parque y los residentes africanos, en particular los masai. A principios de la década de los cincuenta, hubo que crear un puesto administrativo especial en el cráter del Ngorongoro porque, según el comisionado del distrito de la época, "los masai desafiaban abiertamente las leyes del Parque y, en consecuencia, la situación política se había vuelto explosiva y un imán para los agitadores". El director del Parque Nacional se quejó de que "se provocaban incendios malintencionados" en el parque y los masai alanceaban rinocerontes en señal de protesta (alegaban "defensa propia"). Con el tiempo, las difíciles cuestiones relativas a los derechos humanos que se habían evitado durante la campaña para establecer un parque nacional no se pudieron seguir desatendiendo. A medida que aumentaba el malestar entre los residentes del parque, la postura de los conservacionistas se endurecía y se volvía menos ambigua sobre la cuestión de la ocupación humana en un parque nacional. "Los intereses de la fauna y de la flora deben ser prioritarios", escribió un gestor del parque, "los del hombre y sus pertenencias son de importancia secundaria. El hombre y el parque nacional no pueden coexistir".

Más tarde, el Gobierno de Taganyica nombró un comité de investigación para revisar los problemas, examinar las distintas propuestas de reconstitución del parque y hacer recomendaciones. Como resultado, la zona se dividió en dos unidades de gestión separadas, el Parque Nacional del Serengueti y el Área de Conservación del Ngorongoro, donde los masai podrían vivir y pastorear ganado. En el centro de las recomendaciones del comité estaba la aprobación del principio de que los derechos humanos debían quedar excluidos en cualquier parque nacional. En 1959, se aprobó la Ordenanza de Parques Nacionales (modificada). Resumiendo, la legislación, el presidente de la Junta de Supervisión escribió:

> En virtud de esta ordenanza, los parques nacionales de Taganyica se convierten por primera vez en zonas en las que deben excluirse todos los derechos humanos, eliminando así el mayor problema de los fideicomisarios y los parques en el pasado (Territorio Taganyica, 1960).

Se había realizado un refinamiento crítico del concepto de parque nacional. No habría lugar para las personas en los parques de Tanzania.

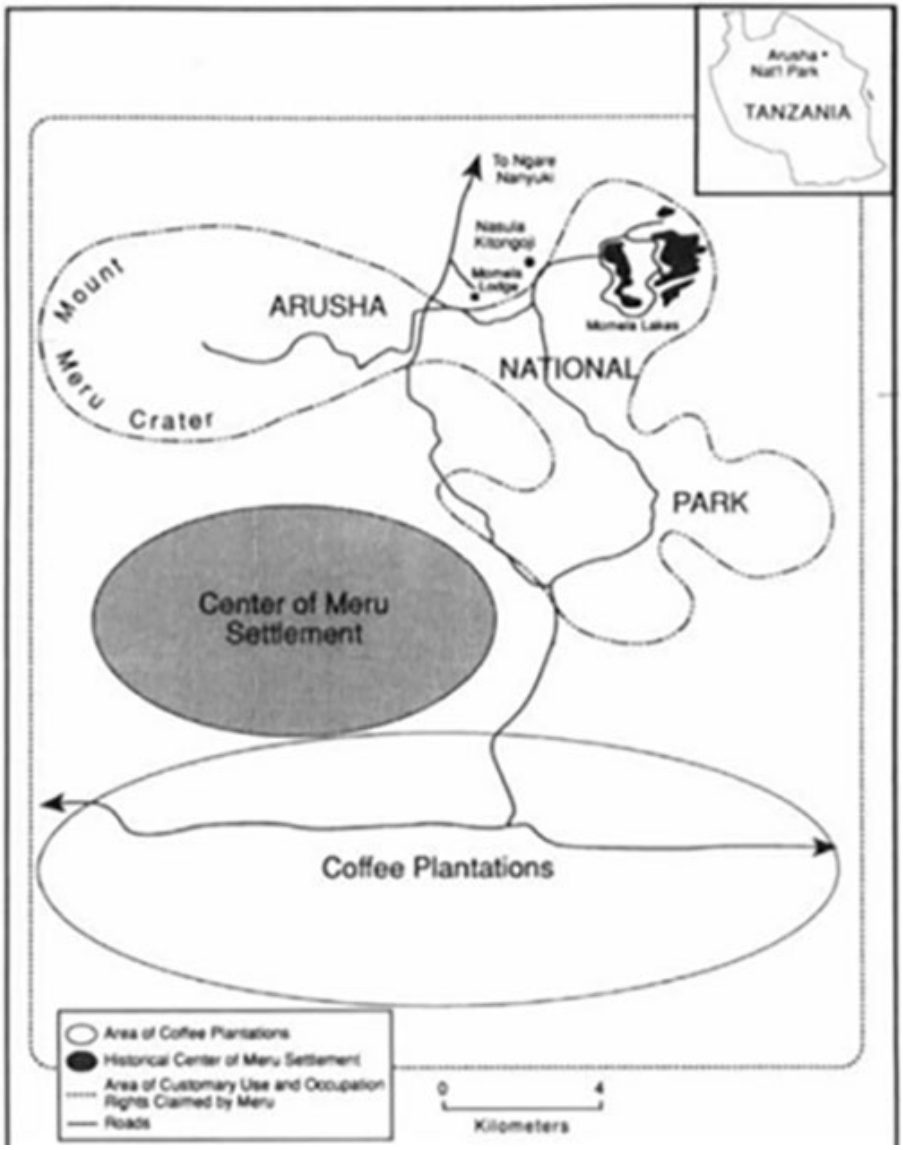
Esta historia ilustra dos puntos clave. En primer lugar, la creación de parques nacionales en Tanzania fue una iniciativa impuesta "de arriba abajo" que se originó en Europa y se llevó a cabo sin el firme apoyo y, de hecho, con la resistencia de los funcionarios de la colonia. Como los conservacionistas europeos tenían una conceptualización explícita de la preservación de la naturaleza que hacía hincapié en la ausencia de influencia humana en la tierra, la creación de los parques puso sobre la mesa el asunto políticamente explosivo de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y los recursos naturales. En segundo lugar, la creación de parques nacionales alteró o redujo de forma drástica las pautas históricas de uso de la tierra, lo que provocó resentimiento y resistencia a las políticas de conservación de la fauna salvaje entre los africanos afectados. Las personas cuyas intrusiones los funcionarios de conservación califican de "invasión" son, de hecho, una población desplazada por las políticas de protección de la naturaleza. El modelo observado en el Parque Nacional del Serengueti se repitió de manera básica, aunque con variaciones, en toda Tanzania tras la independencia. Una vez aclarada jurídicamente la cuestión de los derechos humanos, la creación de parques en otros lugares cobró impulso, empezando por el primer parque nacional posterior a la independencia, Arusha, que se estableció en el monte Meru en 1960. Un examen detallado de la historia del uso de la tierra y la conservación de la naturaleza salvaje en la montaña ilustra las importantes implicaciones de este legado para la conservación de la fauna salvaje en la Tanzania actual.

Parque nacional de arusha

La demarcación de las Reservas Forestales en Kilimanjaro y Meru y la prohibición del cultivo y el pastoreo dentro de sus límites fue probablemente lo más impopular que el Gobierno haya hecho jamás en esas zonas.[9]

9 Informe de la comisión de Tierras Arusha-Moshi 1947. Archivo TNA 16528 Adhesión núm. 591

Figura 1. Mapa esquemático que muestra las posiciones del Parque Nacional de Arusha y las haciendas cafetaleras en relación con el asentamiento Meru y las reclamaciones territoriales.



Las tierras altas del noreste de Tanzania, incluidos el monte Meru y el Kilimanjaro, fueron una de las pocas zonas de Tanzania que atrajeron a colonos europeos durante la época colonial. Cuando los alemanes llegaron a la montaña en la década de 1890, los habitantes de Meru cultivaban la ladera a la montaña sudeste a unos 4 000-6 000 pies (aprox. 1 300-2 000 m) y pastoreaban su ganado en los bosques de arriba y en las llanuras onduladas más secas de la ladera noreste. La llegada de los europeos alteró para siempre las pautas de uso de la tierra en la montaña, ya que se enajenaron extensas zonas para construir fincas de colonos y dejaron a los meru una reserva relativamente pequeña para sus propios asentamientos. Los colonos europeos "arrancaron los ojos del país" y el acceso de los meru a fuentes de abastecimiento de agua, ya que la mayoría se encontraban ahora en granjas de propiedad europea (Luanda, 1986: 59). Además, la reserva forestal creada por los alemanes, que privó a los meru de tierras de pastoreo críticas para la estación seca y de otros recursos, duplicaba la superficie de las "reservas nativas" de Arusha y Meru juntas. De este modo, los meru se encontraron rodeados por un "anillo de hierro" de fincas de propiedad europea (Juez Mark Wilson, en Nelson, 1967: 14).

Cuando el Gobierno británico asumió el dominio de Taganyica tras la Primera Guerra Mundial, muchas de las reservas forestales y cinegéticas implantadas por los alemanes permanecieron intactas. En 1928, la Reserva Forestal de Meru fue reasignada por los británicos, y en 1929 todo el monte Meru, que se extendía ladera abajo hasta el límite del bosque natural de la parte baja (a unos 1.800 metros de altitud), había sido designado como "reserva de caza completa", que en su mayor parte se solapaba con la reserva forestal. La doble designación significaba que los recursos naturales de la zona estaban bajo el control estatal más estricto posible dadas las leyes de conservación existentes en aquel momento, y se prohibía todo asentamiento, cultivo y caza. Aun así, se respetaron ciertos derechos consuetudinarios de acceso a los recursos. En virtud de la Ordenanza Forestal de 1921, los residentes indígenas podían extraer gratuitamente de los bosques productos para su propio uso. El pastoreo, en cambio, se restringía, y la mayoría de las infracciones de la Ordenanza en la década de 1930 se referían a la entrada ilegal de ganado. Lo que quedaba de los

derechos consuetudinarios en la montaña fue objeto de un asalto constante por parte de los funcionarios coloniales encargados de la silvicultura y la conservación de la caza. Poco después de la reordenación de la Reserva Forestal de Meru, el conservador de Bosques quiso acabar con el uso gratuito de los productos forestales por parte de los residentes indígenas porque consideraba que el Gobierno estaba mostrando "una generosidad inexplicable al entregar gratuitamente material para la construcción de casas". Y añadió: "Es moralmente insalubre que el nativo sea 'alimentado con cuchara'; en este sentido, debe trabajar para satisfacer sus necesidades del mismo modo que todos los demás".[10]

En la década de los cuarenta, la escasez de tierras cultivables creada por las enajenaciones para granjas europeas y reservas forestales y cinegéticas amenazaba con convertir la zona tribal de Meru en un "tugurio agrícola", en palabras de un funcionario agrícola del Gobierno. Quizá la mayor dificultad que presentaba esta situación era el traslado del ganado a los pastos. Los colonos negaban a menudo a los meru el paso a través de las fincas con su ganado, dejándoles "sin otro recurso que recurrir a los europeos para pastar y someterse a sus términos".[11] Las tensiones aumentaron y los colonos se quejaron de cortes de vallas e intrusiones, e incluso de enfrentamientos violentos con posibles ocupantes ilegales. Los conflictos por la tierra llegaron a su culmen en 1951, cuando el Gobierno desalojó por la fuerza a 3.000 meru de sus tierras del norte para dar lugar a un plan de colonos mal concebido. El caso de los derechos sobre la tierra fue llevado a la postre ante las Naciones Unidas por los meru y, aunque se perdió allí, la cuestión de la tierra de los meru se convirtió en un punto de convergencia para el incipiente movimiento nacionalista en Taganyika (Japhet y Seaton, 1967).

Con el paso de las décadas, el control estatal sobre los recursos forestales y faunísticos de la montaña se fue haciendo cada vez más estricto, a expensas de los derechos consuetudinarios existentes, que culminó en

10 Del conservador de Bosques al secretario ejecutivo, 4 de abril 1933, Archivo Secretarial TNA H-21559; Circular del Departamento Forestal núm. 1 de 1933, Archivo Secretarial TNA 21559.

11 Del agente del Distrito de Arusha al Comisariado Provincial, Provincia del Norte, 16 de septiembre 1930, Archivo TNA 45/0, Número de Adhesión 69.

la década de los sesenta con la designación del uso de suelo más restrictivo, el Parque Nacional de Arusha. A continuación, se ilustra cómo los derechos consuetudinarios se fueron reduciendo bajo el régimen colonial y, al final, se eliminaron con la Ley de Parques Nacionales del Gobierno independiente. En las laderas bajo el cráter del monte Meru hay extensas masas de frondosos bosques montanos donde la apicultura era productiva en particular debido a la multitud de plantas con flores. En esta zona, ahora delimitada por el parque, cuatro familias tenían derechos de uso exclusivos para la cría de colmenas. Cada familia tenía su propia sección de bosque y el derecho a utilizarla, así como las propias colmenas, que pasaban de padres a hijos. Los incendios o cualquier forma de deforestación devastarían obviamente la producción de miel, por lo que los apicultores mantenían un estricto control sobre el uso del bosque y, de hecho, tenían derecho a una indemnización en caso de que alguien dañara sus emplazamientos.

La realidad de tal sistema de tenencia y especialización de la mano de obra hace inverosímil el argumento de que los apicultores serían culpables de incendiar el bosque. No obstante, la recolección de miel en las reservas forestales estatales fue durante mucho tiempo la principal preocupación de los guardabosques coloniales decididos a la lucha contra los incendios forestales —era una preocupación casi obsesiva del conservador de Bosques, que pedía castigos colectivos, penas de prisión e incluso azotes con vara para cualquiera de los incendiarios (no europeos)—. Argumentando que los apicultores eran una de las principales causas de los incendios forestales, llegó a solicitar que se tipificara como delito la entrada en una reserva con el fin de recolectar miel. El hecho de que hubiera numerosas pruebas de que los apicultores eran necesariamente cuidadosos con el fuego,[12] así como la dudosa viabilidad política de imponer penas severas a una práctica tan antigua, convencieron al Gobierno de que ilegalizar la apicultura no era una alternativa razonable.

12 Tras entrevistar a varios jefes locales, un comisariado provincial concluyó: "Son muy conscientes de que si se emplea el fuego descuidadamente al asaltar las colmenas, la abeja reina puede ser destruida y el enjambre también. El cultivo de la miel y la fabricación de la cera se consideran una profesión entre las tribus, y además experta (Del Comisariado Provincial, Mahenge al secretario ejecutivo, 11 de junio de 1931, Archivo Secretarial TNA 10948).

Frente a esta oposición, la oficina forestal cedió y empezó a diferenciar entre apicultores y *cazadores* de miel —a los que se presentaba como nómadas e irresponsables—. Tras una serie de incendios forestales en el monte Meru en 1937 y 1938, que el conservador de Bosques achacó a los *cazadores* de miel, el Gobierno se convenció y prohibió la entrada a la ladera norte de la montaña sin un permiso escrito. Unos años más tarde, durante un periodo de sequía en la zona de Meru, el conservador volvió a culpar a los *cazadores* de miel de provocar incendios y resucitó el argumento de la "prohibición total de colocar barriles de miel en las reservas forestales". La prohibición no se impuso, pero los apicultores tuvieron que obtener licencias y sus movimientos se vieron cada vez más restringidos, en especial tras la independencia y la creación del parque nacional.

Al final, las autoridades negaron a los apicultores la libertad de circulación por el parque y exigieron que fueran acompañados por un guarda forestal cada vez que entraban a inspeccionar sus colmenas. "Pocos apicultores con licencia entran ahora en el parque para inspeccionar sus colmenas", escribió un guardabosques en 1969, "ya que tienen que ir acompañados de un guarda forestal. Parece que antes no limitaban sus actividades a la apicultura" (República Unida de Tanzania, 1969). El guardabosques no dio más detalles sobre su insinuación, pero parecía insinuar que la recolección de miel era una treta para cazar animales del parque y, con un guardabosques, ya no valía la pena para los agricultores adentrarse en el bosque. Los (antiguos) apicultores me dieron una interpretación diferente de la situación.[13] Se quejaban de que a menudo era difícil conseguir escolta porque era una prioridad baja para los guardas. En 1976, una práctica centenaria en el monte Meru llegó a su fin cuando el guardia les ordenó retirar sus colmenas del parque, ya que, según los apicultores, consideraba que los guardas dedicaban demasiado tiempo a otras áreas, les pidió quitar sus panales del parque. La transferencia del control sobre el acceso a los recursos del ámbito local al estatal se repitió de forma similar para otros derechos consuetudinarios, como la recogida de leña.

13 Salvo que se indique lo contrario, la información sobre el uso local de la tierra y los recursos se obtuvo mediante entrevistas con hombres y mujeres de Meru durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 1990.

La autoridad del Estado también se ha ampliado en el espacio. Los límites del Parque Nacional de Arusha se han ampliado en cuatro actos legislativos distintos desde que en 1960 se publicó por primera vez como Parque Nacional de Ngurdoto (1 722 acres: 1 acre= 0.405 hectáreas).[14] En 1962, había triplicado con creces su tamaño y casi duplicado el de 1964. Posteriormente, en 1967 se creó un segundo parque nacional, el cráter del monte Meru, de 12 120 acres en las laderas más altas de la montaña, y los dos parques se unieron cinco meses después para formar el Parque Nacional de Arusha, de 23 905 acres. Las ampliaciones continuaron en 1969, cuando se nacionalizaron varias fincas de propiedad europea, y se adquirieron otras 4 685 acres.

La enajenación de tierras para la creación de fincas de colonos y reservas forestales y de caza iniciada por los alemanes hace casi un siglo marcó la pauta para el uso de suelo contemporáneo y los asentamientos en el monte Meru. La antigua "Reserva de Nativos de Meru" tiene ahora una de las densidades de población más altas de África Oriental, mientras que las extensas fincas de café situadas más abajo permanecen intactas y en su mayor parte son propiedad de no africanos (Shio, 1977). Los residentes que se vieron obligados a desplazarse debido al desalojo por parte de los británicos o a la escasez de tierras creada por las enajenaciones han migrado a las zonas que ahora se encuentran junto a los límites del parque. El régimen de pastoreo meru nunca se ha recuperado de su colapso bajo el dominio colonial, y la obtención de piensos adecuados parece ser hoy un obstáculo importante para el desarrollo de la industria ganadera local. En lugar de ser eliminadas por completo, los derechos consuetudinarios sobre los bosques de la montaña han ido desapareciendo poco a poco, a medida que el Estado ha endurecido sus restricciones sobre el acceso a los recursos. Prácticamente todos los derechos consuetudinarios de la Reserva Forestal de Meru que se reconocieron durante la dominación colonial británica son ahora ilegales y, con cada ampliación del Parque Nacional de Arusha, se han ido retirando más recursos del uso local. Utilizando ejemplos de un

14 Este resumen del desarrollo del Parque Nacional de Arusha se ha recopilado a partir de las proclamaciones publicadas en la *Government Gazette* incluidos los volúmenes xli, núm. 35, XIII, núm. 53, XLV, núm. 57, XLVIII, núm. 20 y XLIV, núm. 12.

pueblo meru del parque, este artículo trata de demostrar la importancia de reconocer el carácter expansionista de los esfuerzos de conservación del Estado y el legado de enajenaciones coloniales de tierras en el monte Meru para comprender los orígenes de los problemas contemporáneos de conservación de la vida salvaje.

Políticas de aldea y la conservación de naturaleza contemporánea

El centro tradicional del asentamiento meru está dominado por la producción de café a pequeña escala y la ganadería. La tendencia en la cría de ganado es hacia un menor número de animales mejorados, que se alimentan en establos en lugar de pastar en praderas abiertas. La participación en la producción de cultivos comerciales ha proporcionado la base para un nivel de vida creciente en forma de escuelas, hospitales, electricidad y agua corriente. La situación es muy diferente en las aldeas del norte de Meru, como Nasula Kitongoji (subaldea), que está separada de la patria central por el Parque Nacional de Arusha. Los colonos europeos enajenaron grandes extensiones de tierra que acabaron vendiendo a oportunistas (lo suficientemente ricos) meru, que dividieron la tierra en pequeñas propiedades. Aquí el clima es más seco y los suelos más pobres, pero hay zonas de valles con buenas tierras de cultivo. La producción de café es casi inexistente. El cultivo de alimentos básicos, sobre todo maíz y frijol, ocupa la mayor parte de las tierras de labranza, y el pastoreo de ganado en pastizales comunales sigue siendo una actividad económica importante. Las principales fuentes de ingresos de los hogares del norte de Meru son la venta del ganado y de los excedentes de cultivos alimentarios de las parcelas situadas en diversos lugares de la montaña, y los salarios, normalmente procedentes del trabajo ocasional. Muchos residentes adultos de Nasula han emigrado de otra parte de Meru, por lo regular debido a la escasez de tierras en su lugar de nacimiento. La escasez de tierras se está convirtiendo rápidamente en un problema en la zona norte, y los pastos comunales se están convirtiendo cada vez más en tierras de cultivo.

Las parcelas agrícolas y los pastos comunales de Nasula lindan con el límite septentrional del Parque Nacional de Arusha y su pequeño grupo

de casas se extiende a lo largo de los límites de dos fincas originalmente enajenadas de las tierras de Meru.[15]

La zona al sur es la antigua finca Momela, propiedad de la familia alemana Trappe durante muchos años. La mayor parte de Momela fue entregada al Gobierno para que la incluyera en el Parque Nacional de Arusha, pero una estrecha sección, donde ahora se alza el pueblo, quedó fuera. Esta franja fue colonizada por varios meru que trabajaban para los Trappe a principios de la década de los cincuenta y continuaron allí después de que se marcharan los colonos europeos. La propiedad y el acceso a esta zona han sido un punto de fricción entre los gestores del parque y los residentes locales desde su fundación. Los residentes de Nasula saben que se encuentran en una posición vulnerable, ya que han visto cómo los límites del parque se desplazaban de forma progresiva hacia el exterior y temen, y coinciden los registros, que las autoridades del parque codicien las tierras del pueblo, por lo que han puesto en marcha varias iniciativas colectivas destinadas a reforzar sus reivindicaciones sobre la zona. La más controvertida ha sido la construcción de una escuela en una parcela tomada de los pastos comunales del pueblo, situada entre las casas del pueblo y el límite del parque. Según relató uno de los residentes originales, la acción fue una táctica política calculada, inspirada por un antiguo propietario del cercano hotel de safaris Momela (Momela Game Lodge). Explicó que el propietario del hotel "nos resguardó, nos guio y nos dio el consejo de construir una escuela, de la que no teníamos ni idea […] Ahora vivimos aquí como nuestro hogar permanente".

Por esa misma época, los residentes de Nasula formalizaron sus reclamos sobre otra franja de pastos comunales en el límite del parque, solicitando oficialmente al Gobierno que reconociera su subdivisión en parcelas individuales. La importancia que los aldeanos conceden a esta estrategia queda patente en las actas de una serie de asambleas comunitarias convocadas a mediados de 1989. Las asambleas se celebraron en respuesta al rumor de que los límites del parque se ampliarían a las tierras

15 Los meru reclaman toda la zona que abarca estas fincas como sus tierras tradicionales, aunque gran parte de ella estaba sin colonizar y se compartía principalmente con los masai para el pastoreo (Entrevistas con distintos ancianos meru, de enero a agosto de 1990).

de la aldea. Además de enviar una delegación a la Oficina del Distrito para aclarar la cuestión, los miembros del comité de la aldea "acordaron que, en cada parcela habitada por alguien, se planten cultivos permanentes y que quienes no se hayan trasladado lo hagan de inmediato".[16] Una vez más, se trataba de una iniciativa explícitamente política destinada a reforzar la posición de la aldea frente al Estado. La noción de que la "usurpación" de los asentamientos de la aldea en los límites del parque es en parte una respuesta a la atmósfera de inseguridad de la tenencia producida por las políticas de conservación no parece que se les haya ocurrido a los funcionarios. Para los gestores de los parques, entre las causas profundas de estas "amenazas" figuran las intenciones delictivas, el crecimiento demográfico y la falta de comprensión de la conservación por parte de los residentes locales.

Detrás de estos esfuerzos por mejorar su seguridad en la tenencia de la tierra, hay una mezcla históricamente arraigada de amargura y beligerancia hacia el Estado y sus esfuerzos de conservación. Los habitantes de Nasula tienen una interpretación del conflicto entre ellos y el parque que deriva de sus experiencias con el Estado colonial. A menudo, durante mi estancia, la conversación derivó espontáneamente hacia el tema del desalojo forzado de Ngare Nanyuki en 1951,[17] un incidente crítico en la formación de la conciencia política local. En una ocasión, mientras discutía con un anciano la ampliación prevista del parque, una mujer me explicó: "Este es nuestro hogar y no nos van a volver a trasladar". En ese momento empezó a hablar de su expulsión de Ngare Nanyuki casi cuarenta años antes:

> El jefe de los bóers colocó una valla al borde del bosque en el límite de los Trappe y al otro lado de Ngare Nanyuki. Ningún meru podía pasar, ni siquiera para ver a sus familias. Pero este hombre murió y nosotros seguimos aquí. Ahora el parque quiere que nos mudemos de nuevo, pero ellos se irán antes que nosotros.

16 Actas de la Reunión del Comité Kitongoji de Nasula, junio 1989.

17 Ngare Nanyuki es la zona de la que fueron expulsados los meru por los británicos en 1951. Se encuentra a menos de tres kilómetros al norte de Nasula.

Un profesor local, cuyo cultivo familiar fue parcialmente usurpado por el parque, expresó con amargura: "¿Crees que hemos conseguido *uhuru* (independencia)? ¿Acaso esto no es colonialismo?".

Desde el punto de vista de los funcionarios estatales, las iniciativas y la beligerancia de los aldeanos son motivo de alarma, ya que representan para los conservacionistas una amenaza para los objetivos de gestión del parque que se ha calificado de "usurpación". Desde una perspectiva "ascendente" y en el contexto histórico de los cambios impuestos por el Estado en el uso de la tierra y los recursos, se considera que es el parque el que está usurpando las aldeas de Meru. La ampliación continua de los límites del parque y las restricciones impuestas a la circulación y el acceso a recursos esenciales son, para muchos aldeanos, el equivalente moral de la enajenación colonial de tierras, y persiste la animadversión por los derechos perdidos. Tras casi cien años de protección estatal de los bosques y la fauna salvaje del monte Meru, casi no hay apoyo popular a las leyes de conservación. Es difícil encontrar un hogar en Nasula que no haya tenido que pagar una multa por alguna violación del parque. Todos los dirigentes del pueblo, desde la Iglesia hasta los del partido gobernante, han sido multados por pastar ganado en el parque y los lamentos de las sucesivas generaciones de profesionales de los recursos naturales indican que los dirigentes locales, si no socavan directamente las políticas, son apáticos en el mejor de los casos.

La naturaleza de las relaciones entre el parque y las aldeas circundantes no augura nada positivo para la fauna salvaje. Aunque no existe programa alguno de seguimiento ecológico dentro del parque y casi no hay datos sobre las fluctuaciones de las poblaciones de fauna silvestre, se pueden extraer algunas conclusiones sobre el estado de conservación de la fauna salvaje. La conclusión más clara es que el parque ha fracasado en gran medida a la hora de proteger las poblaciones de grandes mamíferos, en particular las especies de valor comercial, ya que el número de elefantes han disminuido y el rinoceronte negro parece haber desaparecido. Los meru, al igual que sus vecinos masai, no tienen una fuerte tradición de caza y se reconoce por lo general (Thorsell, 1982; IUCN, 1987) que la caza furtiva comercial para obtener cuernos y colmillos la llevan a cabo en gran parte personas de fuera de la zona. Sin embargo, sería difícil que dicha

caza furtiva tuviera lugar sin el conocimiento de los aldeanos locales, si no sin su complicidad, y de hecho muchos de ellos me dejaron claro que sabían quiénes eran los cazadores furtivos y cómo operaban. Como los aldeanos respondieron casi unánimemente a mis preguntas confirmando que consideraban que el parque no aportaba ningún beneficio a la aldea, tienen poco interés en cooperar con los organismos estatales en los esfuerzos de conservación de la fauna salvaje.

A pesar de que las autoridades de conservación afirmen lo contrario, los residentes consideran que su Gobierno antepone los derechos de los animales a los de los humanos, y las políticas parecen respaldar esta interpretación. En el pasado, sobre todo durante la época colonial, uno de los principales cometidos de los vigilantes de caza era abatir a los animales que asaltaban los cultivos. A medida que la fauna salvaje ha sido evacuada de las zonas habitadas y se ha retirado a los parques y reservas, se ha hecho más hincapié en proteger a los animales salvajes que se pierden. Durante el periodo de mi estudio, la política de control de la fauna salvaje del parque era que nadie, ni siquiera un vigilante de caza del Gobierno, podía hacer daño a los animales del parque que asaltaran las granjas cercanas. A finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, la dirección del parque instaló dos vallas eléctricas, una de diez kilómetros a lo largo del límite oriental, y otra de dos kilómetros a lo largo del límite septentrional. Ninguna de las dos fue eficaz (los elefantes machos aprendieron rápido a cortocircuitar los cables) y acabaron rompiéndose porque requerían un mantenimiento intensivo que no podía realizarse en el contexto del declive económico de Tanzania. En consecuencia, los campesinos locales se encuentran prácticamente indefensos ante las incursiones de la fauna.

Las ramificaciones de las políticas del parque para el apoyo de la comunidad quedan ilustradas por un aldeano que me dijo: "Si viera a alguien disparar a un animal delante de mí, no diría ni una palabra. Al parque no le importan mis problemas, ¿por qué me deberían importarme a mí los suyos?". A fin de cuentas, sufren tanto las personas como la fauna, ya que los residentes locales que soportan los costos sociales y económicos del parque tienen poco entusiasmo por apoyar la protección de los animales que amenazan su subsistencia.

Discusión

Los hilos sociales y ecológicos que unen al Parque Nacional de Arusha y a los residentes locales se entretejen a lo largo del tiempo y dotan al conflicto de una continuidad histórica que desafía la interpretación predominante de los problemas de conservación de la fauna salvaje en el monte Meru. Por medio del dominio británico e independiente y en el transcurso de tres generaciones de meru, esta continuidad se expresa en los informes profesionales sobre el conflicto y en la reacción de los residentes a las leyes estatales que rigen el uso de los recursos naturales.

Exasperados por su incapacidad para detener el pastoreo en la Reserva Forestal de Meru, los silvicultores coloniales echaron la culpa a las autoridades locales. "Parece razonable suponer", escribió el conservador de Bosques en 1928, "que la reticencia mostrada por el Tribunal Nativo, que simpatiza con los infractores, a tomar medidas, ha tenido algún efecto en el gran aumento de este tipo de delitos". Más de sesenta años después, hay una similitud reveladora en el informe del personal del Parque Nacional de Arusha, que se quejaba de que "la cooperación con los aldeanos no es muy buena, porque cuando se informa de actividades de caza furtiva a los líderes de las aldeas, prometen ocuparse de ellas, pero como resultado no se hace nada'.

La protección de la fauna salvaje, o cualquier otra política de conservación, suele ser un empeño político que genera ganadores y perdedores. Para entender por qué se resiste una determinada política de conservación, hay que preguntarse quién gana y quién pierde (Blaikie, 1985). En Tanzania, la fauna salvaje, primero mediante el atractivo de la caza y lugar del avistamiento de animales y la fotografía, ha sido reconocida desde hace tiempo como una fuente de ingresos para el Estado.[18] Los ingresos procedentes de las tarifas de entrada, impuestos turísticos y demás le corresponden únicamente a la tesorería central. Por otro lado, no cabe duda de que los residentes locales han perdido el acceso a una serie de beneficios materiales que aún no han sido sustituidos por fuentes alternativas. A partir del dominio

18 En anteriores planes quinquenales de desarrollo nacional se prevenía que el turismo, basado en gran medida en el atractivo de los parques nacionales, constituiría la segunda fuente más grande de divisas del Gobierno.

alemán, la política estatal de conservación ha iniciado una reestructuración de la tenencia de los recursos que no solo redefine el uso aceptable de los recursos, sino que redirige los beneficios de la utilización lejos de la comunidad local. Quienes ocupaban puestos de autoridad en el sector de la conservación no solo desconocen la importancia de esta redistribución en el conflicto actual, sino que a veces hasta se esfuerzan por negar que se haya producido. Como declaró el presidente de la Junta de Supervisión de los parques: "Los parques, en términos generales, están formados por tierras de escasa utilidad para la habitación humana, razón por la cual ha sido posible convertirlos en Parques Nacionales con una perturbación mínima de los derechos existentes" (República Unida de Tanzania, 1968). Por tanto, según la versión oficial de la historia, los esfuerzos por proteger o restaurar los derechos consuetudinarios no pueden ser más que actos de robo o allanamiento, carentes de significado político.

A medida que se reforzaba el control estatal sobre los recursos naturales, las estructuras políticas consuetudinarias locales quedaban relegadas a un segundo plano. Durante el periodo colonial, los agricultores y pastores africanos nunca fueron reconocidos como participantes en el debate sobre la conservación de los recursos en Tanzania. La lucha política se desarrollaba por encima de ellos —entre funcionarios de Londres y Dar es Salaam y los funcionarios y profesionales de los recursos de la colonia—, y una vez decidido el control de los recursos, tenían pocas oportunidades para disputar la decisión. Desde la independencia han seguido perdiendo terreno en cuanto al control de los recursos críticos y soportando las privaciones de la fauna salvaje que saquea sus cultivos. Los campesinos del monte Meru están en gran medida excluidos del proceso político formal y se ven abandonados a cualquier defensa que puedan reunir, alianzas *de facto* con cazadores furtivos comerciales, "remolonear" con el cumplimiento de las normas y tácticas poco sistémicas para reforzar las reivindicaciones consuetudinarias sobre la tierra y los recursos.

Es en la exploración de la política cotidiana de las aldeas y del significado político de las acciones campesinas donde la literatura sobre ecología política fracasa hasta ahora en su análisis, lo que hace necesario ampliar la perspectiva. El trabajo de Scott (1985; 1986) sobre las "formas cotidianas

de resistencia" ofrece posibilidades convincentes para enriquecer la investigación sobre los orígenes sociales de la degradación ambiental. Scott sostiene que acciones como la caza furtiva o la invasión de tierras forestales estatales son formas características de resistencia cotidiana, cuyo objetivo no es reformar el ordenamiento jurídico, sino "deshacer su implantación en la práctica" (1987: 447).[19] El argumento es, en pocas palabras, que estas formas silenciosas y anónimas de lucha campesina, a menudo el único recurso para los miembros de una clase subordinada que intenta reclamar o mantener los derechos consuetudinarios, son elementos cruciales de la política local.

Siguiendo a Scott, varios estudios han destacado la relevancia de la política a pequeña escala para el uso de la tierra y las cuestiones ecológicas. Carney y Watts (1990: 210) muestran cómo la lucha por el acceso a la tierra y los recursos en Gambia, desencadenada por la introducción de un nuevo sistema de producción agrícola, comienza con la política dentro del hogar campesino y que "el punto de apoyo de estas […] luchas es el género". Guha (1990) y Peluso (1992) investigan las luchas locales por el acceso a los recursos forestales: Peluso compara las variaciones en las formas de resistencia campesina a la política forestal como respuestas a diferentes formas de control estatal, y Guha vincula los orígenes de un movimiento ecologista de base contemporáneo a una historia de resistencia campesina al control estatal. El avance de la ecología política en esta dirección, con un papel más destacado de la política en el plano microeconómico y la ampliación del análisis a las estructuras políticas informales, ampliará con creces el potencial de la perspectiva para esclarecer los conflictos sobre el uso de la tierra y los problemas ambientales.

Agradecimientos

La investigación fue financiada por una beca del Joint Committee on African Studies del Social Science Research Council y el American Council of Learned Societies, con fondos de la Fundación Rockefeller y la William and

19 N de T.: Se advierte al lector que esta cita en específico no consta en la lista de referencias.

Flora Hewlett Foundation, una beca Fulbright-Hays para la investigación de tesis doctorales en el extranjero y una beca del National Science Foundation para la mejora de tesis doctorales. Agradezco a Michael Watts y Nancy Lee Peluso sus útiles comentarios sobre un borrador anterior de este artículo.

Referencias

Anderson, D. y R. Grove (eds.). (1987). *Conservation in Africa: people, policies and practice*. Cambridge University Press.

Arhem, K. (1985). *Pastoral man in the garden of eden: the Maasai of the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania*. University of Uppsala.

Bassett, T. (1988). The political ecology of peasant-herder conflicts in the Northern Ivory Coast. *Annals of the Association of American Geographers*, *78*, 453-472.

Blaikie, P. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries*. Longman.

Blaikie, P. (1989). Explanation and policy in land degradation and rehabilitation for developing countries. *Land Degradation & Rehabilitation*, *1*, 23-37.

Blaikie, P. y H. Brookfield. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.

Carney, J. y M. Watts. (1990). Manufacturing dissent: work, gender and the politics of meaning in a peasant society. *Africa*, *60*, 207-241.

Carruthers, J. (1989). Creating a national park, 1910 to 1926. *Journal of Southern African Studies*, *15*, 188-216.

Collins, J. L. (1986). Smallholder settlement of tropical South America: the social causes of ecological destruction. *Human Organization*, *45*, 1-10.

Diehl, C. (1985). Wildlife and the Maasai: the story of East African parks. *Cultural Survival Quarterly*, *9*, 37-40.

Guha, R. (1990). *The unquiet woods: ecological change and peasant resistance in the Himalaya*. University of California Press.

Hecht, S. B. (1985). Environment, development and politics: capital accumulation and the livestock sector in Eastern Amazonia. *World Development*, *13*, 663-684.

IUCN. (1984). *Threatened protected areas of the world*. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Commission on National Parks and Protected Areas.

IUCN. (1987). *Directory of Afrotropical Protected Areas*.

Japhet, K. y E. Seaton. (1967). *The Meru land case*. East African Publishing House.

Kjekshus, H. (1977). *Ecology control and economic development in East African history: the case of Tanganyika*. University of California Press.

Luanda, N. N. 1986. *European commercial farming and its impact on the Meru and Arusha peoples of Tanzania, 1920-1955* [tesis de doctorado, University of Cambridge].

Marks, S. A. 1984. The Imperial Lion: human dimensions of wildlife management in Central Africa, Westview Press, Boulder, Colorado.

Neumann, R. P. y G. E. Machlis. (1989). Land-use and threats to parks in the neotropics. *Environmental Conservation*, *16*, 13-18.

Nelson, A. 1967. The Freemen of Meru, Oxford University Press, New York and Nairobi.

Painter, M. (1987). Unequal exchange: the dynamics of settler impoverishment and environmental destruction in lowland Bolivia. En P. Little y M. Horowitz (eds.), *Lands at risk in the third world: local level perspectives* (pp. 164-192). Westview Press.

Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: forest access and control in Java*. University of California Press.

Pratt, D. M. y V. H. Anderson. (1982). Population, distribution and behaviour of giraffe in the Arusha National Park, Tanzania. *Journal of Natural History*, *16*, 481-489.

República Unida de Tanzania. (1968). *Tanzania National Parks annual report 1967/68*. Government Printers.

República Unida de Tanzania. (1969). *Arusha National Park yearly report (Supplement) for July 1, 1968-June 30, 1969*. Documento gubernamental inédito.

República Unida de Tanzania. 1986. *Tanzania National Parks annual report 1985/86*. Government Printers.

Schmink, M. y C. H. Wood. (1987). The "political ecology" of Amazonia. En P. Little y M. Horowitz (eds.), *Lands at risk in the third world: local level perspectives* (38-57). Westview Press.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Scott, J. C. (1986). Everyday forms of peasant resistance. *Journal of Peasant Studies*, *13*, 5-35.

Shio, L. J. (1977). *A political economy of the plantation system in Arusha* [tesis de maestría, University of Dar es Salaam].

SPFFE. (1931). *Major Richard Hingston's report on a mission to East Africa*. Society for the Protection of the Flora and Fauna of the Empire.

Stonich, S. C. (1989). The dynamics of social processes and environmental destruction: a Central American case study. *Population and Development Review*, *15*, 269-295.

Territorio Tanganyika. (1960). *Tanganyika National Parks, reports and accounts of the Board of Trustees July 1959 to June 1960*. Government Printers.

Thorsell, J. (1982). Evaluating effective management in protected areas: an application to Arusha National Park, Tanzania [ponencia en *World National Parks Congress*, Bali, Indonesia, 18-20 de octubre].

Turton, D. (1987). The Mursi and national park development in the lower Omo Valley. En D. Anderson y R. Grove (eds.), *Conservation in Africa: people, policies and practice* (169-186). Cambridge University Press.

United Republic of Tanzania. 1968. Tanzania National Parks Annual Report 1967/68, Government Printers, Dar es Salaam.

United Republic of Tanzania. 1969. Arusha National Park Yearly Report (Supplement) for July 1, 1968-June 30, 1969, Unpublished

United Republic of Tanzania. 1986. Tanzania National Parks Annual Report 198.5/86, Government Printers, Dar es Salaam,

Vesey-Fitzgerald, D. F. (1973). The dynamic aspects of the secondary vegetation in Arusha National Park, Tanzania. *East African Agricultural and Forestry Journal*, enero, 314-327.

Watts, M. (1985). Social theory and environmental degradation: the case of Sudano-Sahelian West Africa. En Y. Gradus (ed.), *Desert development: man and technology in sparselands* (14-32). D. Reidel.

35. Pueblos y parques: el impacto social de las áreas protegidas[1]

Paige West, James Igoe
y Dan Brockington

Resumen: Este texto examina los efectos sociales, económicos y políticos de los proyectos de conservación ambiental que constituyen las áreas protegidas. Prestamos especial atención a las personas que habitan en áreas protegidas o que han sido desplazadas de ellas, analizamos el crecimiento de las áreas protegidas en el mundo durante los últimos veinte años, y ofrecemos sugerencias para futuras iniciativas de investigación en antropología. Examinamos las áreas protegidas como formas de ver, entender y producir naturaleza (ambiente) y cultura (sociedad), y como una forma de manejar y controlar la relación entre ambas. Nos enfocamos en los cambios sociales, económicos, científicos y políticos en sitios donde existen áreas protegidas y en los centros urbanos que controlan estas áreas. También examinamos la violencia, el conflicto, las relaciones de poder y la gubernamentalidad como dinámicas conectadas a los procesos de conservación. Por último, examinamos el discurso y sus efectos, argumentando que la antropología necesita superar los análisis actuales sobre el lenguaje y el poder, para abordar las diversas formas en que las áreas protegidas producen espacio, lugar y da forma a la vida de las personas.

Introducción

A lo largo de los últimos veinticinco años, la atención de los antropólogos se ha extendido más allá de la vida social en el ámbito local, para incluir la experiencia de procesos a mayor escala. Esto ha resultado en la

1 Publicado originalmente en: Paige West, James Igoe y Dan Brockington, 2006 "Peoples and parks: the social impact of protected areas", *Annual Review of Anthropology*, 31: 251-277.

proliferación de nuevas áreas en la etnografía y el análisis, tales como el transnacionalismo, el colonialismo, el poscolonialismo y la globalización. Un área que también ha recibido atención creciente en los últimos años es el ambientalismo. En este ámbito, convergen el interés reciente de nuestra disciplina por las interacciones entre lo local y lo global, y su preocupación histórica por la relación de los pueblos con su entorno. Esta convergencia, así como la cada vez mayor participación de los antropólogos en asuntos prácticos, es esencial en el interés de los antropólogos por la conservación, que se remonta a la década de los setenta (Orlove y Brush, 1996).

Con *entorno* nos referimos al mundo a nuestro alrededor al que nosotros, como humanos, tenemos acceso intelectual y simbólico, y que conformamos por medio de nuestras acciones cotidianas para transformarlo y otorgarle sentido (Carrier, 2004: 1). El término *entorno* supone que el mundo es material y simbólicamente compuesto por la acción humana, una afirmación que antropólogos y otros científicos sociales han aceptado desde que Escobar (1995) fusionó la ecología política con el posestructuralismo. Al emplear este término, evitamos las discusiones sobre la construcción social de la naturaleza *versus* la naturaleza material del ambiente, pues el término se refiere a ambas: el mundo está allá afuera e interactuamos con él en formas que lo reproducen, con frecuencia alterándolo en el proceso (Smith, 1990). Sin embargo, el mundo sólo tiene significado para nosotros, como animales que utilizan un lenguaje y crean símbolos, en función de cómo lo aprendemos con el intelecto.

Dentro del interés disciplinario del ambientalismo existe un subconjunto de estudios sobre los efectos sociales de las áreas protegidas. La atención reciente en las áreas protegidas como tema antropológico refleja un profundo aumento en el alcance y la complejidad de las áreas protegidas. Los registros oficiales enlistan más de 105 000 áreas protegidas en el mundo, las cuales abarcan 20.3-21.5 millones de kilómetros cuadrados, dependiendo de cómo se midan. Las áreas protegidas terrestres comprenden 16.8 millones de kilómetros cuadrados, u 11% de la superficie terrestre (Tabla 1), mientras que las áreas protegidas marinas abarcan 4.7 millones de kilómetros cuadrados. De las primeras, aproximadamente 6.4 millones de kilómetros cuadrados (4.3% de la superficie terrestre) se encuentran

en categorías que pueden imponer restricciones importantes al uso y la ocupación humanas. Globalmente, la distribución espacial y la distribución por tamaño y tipo de áreas protegidas es muy dispareja (Tabla 1). Además, muchas áreas protegidas han sido creadas en tiempos recientes (Figura 1). La tasa de establecimiento saltó a un nivel sin precedentes en la década de los setenta, y llegó a su punto máximo entre 1985 y 1995. En los últimos diez años, hemos visto una actividad global con parámetros similares a los de la década de los setenta.

Debido al incremento reciente de áreas protegidas, es oportuno realizar una revisión, aunque esta es una tarea demandante. Aquí estructuramos nuestro trabajo en torno a dos preguntas clave y una aseveración central. Nuestras preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son los efectos sociales, materiales y simbólicos de las áreas protegidas?, y ¿cómo estas impactan la vida de los pueblos y sus entornos? Nuestro argumento es que las áreas protegidas importan porque son una forma de ver, entender y (re)producir el mundo. Como tal, son sitios ricos para la producción y la interacción social. Las áreas protegidas contemporáneas no solo afectan a las personas que viven en ellas, sino también a quienes trabajan para las organizaciones no gubernamentales (ong) y las agencias gubernamentales que crean y administran las áreas protegidas. Asimismo, alteran los paisajes al modificar el nombre de los lugares, trazar fronteras alrededor de zonas protegidas y borrarlas entre Estados. Comenzamos esta revisión examinando cómo las áreas protegidas crean una suerte de "virtualidad" (Carrier y Miller, 1998). Luego examinamos la literatura antropológica sobre sus efectos sociales. Por último, ofrecemos sugerencias para futuras líneas de investigación para antropólogos que deseen examinar el efecto social de las áreas protegidas.

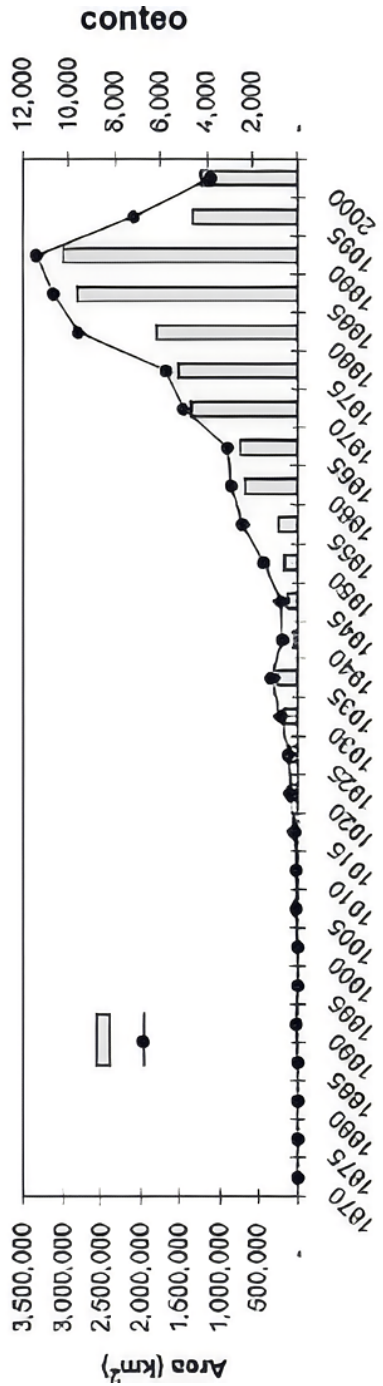


Figura 1. El crecimiento global de las áreas protegidas.

El estado del análisis antropológico de áreas protegidas

En su revisión, Orlove y Brush (1996) encontraron que la literatura publicada sobre áreas protegidas se limitaba sobre todo a revistas de antropología aplicada. Sin embargo, una década después también encontramos publicaciones relevantes en las revistas más reconocidas de la disciplina, como *Current Anthropology*, *American Anthropologist*, *American Ethnologist* y *Cultural Anthropology*. También hay numerosos volúmenes editados (Anderson y Berglund, 2003; Anderson e Ikeya, 2001; Brechin *et al*., 2003; Brosius *et al*., 2005; Chatty y Colchester, 2002; Ghimire y Pimbert, 1997; Greenough y Tsing, 2003; Hulme y Murphree 2001), varias monografías de autor único (Adams, 2004; Brockington, 2002; Haenn, 2005; Igoe, 2004; Neumann, 1998; Orlove, 2002; Ranger, 1999; Walley, 2004; West, 2006), una obra importante de revisión (Borgerhoff y Coppolillo, 2005), y varias tesis recientes sobre áreas protegidas (Austin, 2003; Castagna, 2005; Doane, 2001; Ediger, 2005; Erazo, 2003; Garner, 2002; Gustavo, 2005; Kohler, 2005; Nyhus, 1999; Palmer, 2001; Paudel, 2005; Peterson, 2005; Sodikoff, 2005; Stern, 200; Stronza 200; Van Helden, 2001; Wagner, 2002; Weiant, 2005). Por último, los antropólogos han participado cada vez más en la creación de instituciones que se ocupan de la relación entre las personas y las áreas protegidas, incluyendo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN), la Comisión sobre Política Social, Ambiental y Económica y el Grupo de Trabajo Científico de la Sociedad de Biología de la Conservación.

Las áreas protegidas como una forma de virtualidad

El crecimiento y extensión de las áreas protegidas se registra en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas, que denominaremos de aquí en adelante como Base de Datos, y ha sido reportado periódicamente en las investigaciones antropológicas (Borgerhoff y Coppolillo, 2005; Geisler y de Sousa, 2001; Orlove y Brush, 1996; Zimmerer *et al*. 2004). Sin embargo, estos reportes utilizan datos relativamente viejos, el más reciente de ellos hace uso de la versión de la Base de Datos de 1996. La versión actual de esta base contiene tres veces más registros que los que contenía en 1996. La extensión de las áreas protegidas reportadas ha aumentado al menos 50%. Este aumento no es solo una consecuencia del reciente crecimiento en número, sino también refleja una mejora en el monitoreo de las áreas protegidas ya existentes.

Tabla 1. Distribución de las áreas protegidas marinas y terrestres en diferentes regiones de la UICN.

Terrestre			Marina		Total		Proporción de tierra protegida (%)[2]			
Región de la UICN[1]	Conteo	Área (km²)	Conteo	Área (km²)	Conteo	Área (km²)	Categoría 1–4[3]	Categoría 5–6[3]	Sin categoría	Total
Antártida	67	2,265	59	68,054	126	70,318	0	0	0.01	0.02
Australia y Nueva Zelanda	9,085	798,684	467	702,165	9,552	1,500,849	6.88	3.11	0.04	10.04
Pacífico	199	55,311	288	33,451	487	88,762	0.8	1.23	7.98	10
Asia del Sur	1,076	327,247	184	28,832	1,260	356,079	5.41	0.3	1.59	7.3
Sudeste Asiático	2,238	656,193	420	213,546	2,658	869,740	5.11	4.5	4.99	14.6
Asia Oriental	2,986	1,921,762	295	64,675	3,281	1,986,437	1.92	14.12	0.26	16.3
Eurasia del Norte	17,642	1,610,320	82	470,308	17,724	2,041,027	5.24	0.48	1.56	7.29
Europa	43,159	662,995	745	162,969	43,904	825,964	3.13	6.3	3.28	10.71
África del Norte y Medio Oriente	1,230	1,204,928	141	161,356	1,371	1,366,284	2.11	6.85	0.41	9.37
África Oriental y Meridional	3,924	1,789,578	152	116,942	4,076	1,906,520	5.92	4.63	4.9	15.46
África Occidental y Central	2,554	1,290,420	43	60,908	2,597	1,351,328	5.46	0.77	3.86	10.09
América del Norte	12,863	3,147,172	760	1,289,346	13,623	5,336,519	6.07	5.09	3.08	14.23
América Central	548	117,954	129	38,317	677	156,271	6.9	8.01	7.64	22.55
Caribe	494	18,836	473	69,309	967	88,145	5.22	1.55	1.25	8.02
Sudamérica y Brasil	2,500	3,206,623	202	369,987	2,702	3,576,609	4.48	8.87	7.16	18.01
Total	**100,565**	**16,810,289**	**4,440**	**4,710,564**	**105,005**	**21,520,853**	**4.35**	**4.09**	**2.91**	**11.34**
										Área (km²)

Tabla I. Continuación.

Recuento de todas las áreas protegidas en cada clase de tamaño						
<1 km²	≥1 km² <10 km²	≥10 km² <100 km²	≥100 km² <1000 km²	≥1000 km² <10,000 km²	≥10,000 km² <100,000 km²	≥100,000 km² <1,000,000 km²
40	40	14	8	2	1	0
5242	2559	1165	425	123	20	2
83	101	93	43	23	1	0
161	236	370	384	63	5	0
230	509	831	786	166	12	0
259	413	1542	812	181	20	2
7166	3083	1507	1158	289	33	1
26,885	7678	2908	1137	141	2	0
223	217	303	239	57	13	2
527	926	1290	831	300	31	0
90	629	875	643	179	28	0
3118	3568	3069	1553	525	69	2
66	157	225	162	32	1	0
373	236	140	55	14	1	0
285	418	716	623	410	82	1
44,748	**20,770**	**15,048**	**8859**	**2505**	**319**	**10**
10,612	**75,767**	**539,300**	**2,895,756**	**7,591,812**	**6,960,583**	**3,447,024**

*Los países que componen cada región se encuentran en http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/ Hemos modificado ligeramente estas categorías de la siguiente manera. La iucn clasifica Comoros, Djibouti, Madagascar y Mauritius como parte de África Central y Occidental. Nosotros las hemos asignado a África del Este y del Sur. Por sí solo, Brasil conforma una región entera de la iucn, pero aquí lo hemos agrupado con América del Sur. La iucn no ha asignado una región a Sao Tome y Principe, Anguilla, ni a los territorios del Océano Índico británico, así que nosotros los hemos colocado en África Occidental y Central y el Caribe y el sur de Asia, respectivamente.

** Sólo incluimos áreas protegidas terrestres dado que contamos únicamente con datos respecto a la dimensión de la superficie terrestre dentro de cada país y, por tanto, no podemos plasmar las áreas protegidas marinas como una proporción respecto al tamaño del país.

***Las categorías se refieren a las categorías de áreas protegidas de la iucn, definidas de la siguiente manera: categoría 1a, la reserva natural estricta. Área protegida gestionada principalmente para la ciencia; categoría 1b, área silvestre. Área protegida gestionada principalmente para la protección de ecosistemas y actividades recreativas; categoría 3, monumento nacional. Área protegida gestionada principalmente para la conservación de características naturales específicas; categoría 4, área de manejo de hábitat/especies. Área protegida gestionada principalmente para la conservación mediante intervenciones de manejo; categoría 5, paisaje terrestre o marino protegido. Área protegida gestionada principalmente para la conservación del paisaje terrestre o marino y actividades recreativas; categoría 6, área protegida con uso sustentable de recursos naturales: área protegida gestionada principalmente para el uso sustentable de los recursos naturales.

Sin embargo, bajo sus propios estándares, la Base de Datos aún puede mejorarse mucho. No se conocen las dimensiones de 12% de las áreas protegidas registradas. Además, 35% de los registros no cuentan con una fecha de establecimiento. Aunque en 2003, el Quinto Congreso Mundial de Parques celebró formalmente el logro de proteger 10% de la superficie terrestre del planeta, la meta bien pudo haberse alcanzado desde que el Cuarto Congreso Mundial de Parques fijó ese objetivo en 1992. También hay claras anomalías en los sistemas de categorización que la iucn utiliza en la Base de Datos. Chape *et al.* (2005) obviaron la clasificación marina/terrestre y mapearon las áreas protegidas existentes sobre un modelo de gis (sistema de información geográfica) de la superficie y los mares del planeta. Descubrieron que 18.4 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas cubrían la tierra, sustancialmente más que lo indicado por el sistema de categorización. Por tanto, la Base de Datos claramente es un instrumento torpe que, incluso si estuviera bien calibrado, deberíamos utilizar con precaución. La Base de Datos no es solo un registro de prácticas, sino también es una manera borrosa de ver el mundo con puntos ciegos que sus operadores no perciben fácilmente, pero estos puntos ciegos se vuelven más oscuros y difusos a medida que el instrumento mejora. Para funcionar de manera óptima, la Base de Datos podría borrar o excluir precisamente el tipo de prácticas locales que sustentan desde un inicio nuestros intereses (Brosius, 1999b).

La Base de Datos solo registra la actividad del Estado. Es ciega ante la acción informal individual y colectiva. Por ejemplo, las áreas protegidas privadas no están incluidas en los datos. En Sudáfrica, más de 13% del país se reserva para granjas cinegéticas, en comparación con solo 6% destinado a áreas protegidas nacionales y provinciales. También se omiten diversas modalidades informales de conservación comunitaria y de gestión de recursos naturales, desde bosques sagrados hasta pastizales para terneras y áreas de conservación comunitarias (Pathak *et al.*, 2004). La Base de Datos sólo puede incluir lo que los países integrantes que proporcionan la información reconocen oficialmente como conservación.

Ninguna de estas observaciones pretende sugerir que deberíamos descartar estos datos, pues todos los hechos están moldeados por las circunstancias de su creación. En cambio, como discutimos a continuación, herramientas como la Base

de Datos se vuelven más interesantes porque a menudo transforman el mundo a su propia imagen. Aunque la meta de proteger 10% de la superficie terrestre quizá se estableció cuando ya se había alcanzado ese nivel, esta incitó a muchas ONG a extender activamente sus redes de áreas protegidas a inicios de la década de los noventa. Su actividad y la recaudación de fondos para cumplir este objetivo les proporcionó autoridad y éxito. El sistema de categorías que adoptó la IUCN (Tabla 1, nota 3) se emplea para reescribir y modificar la legislación sobre áreas protegidas en un número creciente de países (Bishop *et al*., 2004). Las categorías de gestión destinadas a describir el estado de un parque se utilizan ahora para prescribir y proscribir actividades en su interior. Las áreas protegidas ofrecen una forma de ver y gobernar el mundo que tiene múltiples efectos sociales Las áreas protegidas se han convertido cada vez más en el medio por el que mucha gente ve, comprende, experimenta y utiliza zonas del mundo que a menudo se consideran como naturaleza y ambiente. Esta visión virtualizadora (Carrier y Miller, 1998), aunque rara vez disputada, ha impuesto la dicotomía europea naturaleza/cultura en sitios y personas donde la distinción entre naturaleza y cultura no existía previamente (Strathern, 1980). Así, las áreas protegidas se han convertido en una nueva cosmología de lo natural —una forma de ver y de ser en el mundo— que es ahora vista como justa, moral y correcta. En efecto, las áreas protegidas son el medio material y discursivo por medio del cual los discursos, las prácticas y las instituciones de conservación y desarrollo rehacen el mundo (Brosius, 1999a; Watts, 1993). Las implicaciones de esto no pueden analizarse simplemente prestando una mayor atención a la construcción social de la naturaleza (cf. Nygren, 1998), es necesario también examinar los efectos materiales de la producción de nuestro entorno.

La separación entre naturaleza y cultura

En toda la literatura encontramos casos de la separación discursiva y material de las personas y su entorno mediante las categorías de naturaleza, cultura, ambiente y sociedad (Wilshusen *et al*., 2002). Chape *et al*. (2003, p. 10) demuestran que la IUCN, por medio del proceso de enlistar y catalogar los tipos de áreas protegidas para crear un sistema de categorización mundial, impulsa a los Gobiernos nacionales a adaptar sus espacios protegidos a estas categorías internacionales que separan a las personas de su entorno. Esto

constituye una forma de gentrificación (Errington y Gewertz, 2001; West y Carrier, 2004) del mundo externo, pues la IUCN toma una serie de categorías imaginadas desde fuera y reestructura el mundo para fijar estas categorías, casi sin considerar las categorías descriptivas nacionales o locales. Antropológicamente hablando, estas distinciones reflejan los imaginarios occidentales de naturaleza y cultura que se imponen a gran parte del mundo (Gillison, 1980; Johnson, 2000; Seeland, 1997; Strathern, 1980).

Nygren (1998: 213) demuestra que las ong dependen mucho de "la división occidental entre naturaleza y cultura". Las publicaciones de ong a menudo presentan a la naturaleza como un objeto estático, distinto de los seres humanos. En consecuencia, comprenden los efectos ecológicos de las actividades humanas —derivadas de la cultura— como antinaturales. En otros casos, pueden presentar a los pueblos indígenas como nobles salvajes ecológicos, cuyas culturas están de algún modo más cercanas a la naturaleza. Sin embargo, la imposición de la supuesta dicotomía naturaleza/cultura ha tenido importantes repercusiones materiales y sociales, con independencia de que los pueblos indígenas se imaginen o se proyecten a sí mismos dentro o fuera de la naturaleza (Adams, 2003), ya sea por la exclusión forzada de sus tierras o por la imposición de normas discursivas casi imposibles de cumplir en la práctica (Igoe, 2005; West, 2001).

Algunos autores muestran cómo la creación discursiva y la subsecuente separación de la naturaleza y la cultura están atadas a las distintas cosmovisiones de los actores involucrados en la conservación y a las diferentes narrativas sobre emancipación y sustentabilidad disponibles en la escala discursiva global (Dove, 2003; Igoe, 2005; MacDonald, 2004; West, 2001). Baviskar (2003) examina las ideas de los activistas ambientales en India y de comunidades rurales sobre las relaciones entre las personas y su entorno, y demuestra que las negociaciones sobre la producción de discursos tienen efectos materiales en los derechos de propiedad sobre la tierra y el uso de suelo. Stegeborn (1996) demuestra cómo la noción de cazadores furtivos, una producción discursiva de las personas como separadas de su entorno y perjudiciales a él, condujo a la expulsión del pueblo wanniya-laetde de los bosques protegidos en Sri Lanka.

Goldman (2001), utilizando datos de la región de Mekong en Laos, demuestra cómo las nuevas definiciones de territorio y uso de suelo impuestas por el Banco Mundial separan a las personas de su entorno en formas que no conducen claramente hacia el desarrollo sustentable. Roth (2004) explica que el concepto tailandés de naturaleza incluye a los humanos pero que las ong internacionales, en su trabajo con áreas protegidas en Tailandia, imponen las ideas occidentales sobre la separación entre naturaleza y cultura. Esto ha conducido, por un lado, a que la población local se resista al establecimiento de áreas protegidas. Por el otro, da lugar a alianzas entre ong y la población local basadas en discursos sobre derechos humanos y desarrollo sustentable (Roth, 2004).

La noción de naturaleza salvaje como un sitio que no debe ser desarrollado de forma comercial presenta otras oportunidades para la formación de alianzas entre comunidades locales y los conservacionistas. Por ejemplo, la creación del Parque Nacional Gates of the Arctic en Alaska fue posible gracias a una alianza entre activistas inuit y conservacionistas que buscaban bloquear un oleoducto (Catton, 1997). El Parque Nacional Kakadu, en el Territorio Norte de Australia, se logró gracias a una alianza similar para obstaculizar la minería de uranio (Lawrence, 2000). West (2005) demuestra además el vínculo entre la separación de las personas y el entorno con la agenda de la conservación neoliberal, donde la biodiversidad o la naturaleza constituyen mercancías y la población local mano de obra. En estos contextos, los pueblos indígenas también pueden convertirse en mercancías, a medida que su cultura se convierte en parte de los bienes que ofrecen las iniciativas de conservación centrada en las personas o en la comercialización del ecoturismo (Igoe, 2004).

Cambios en los derechos de uso, desplazamiento y conflicto

El Plan de Acción de Durban, principal resultado del quinto Congreso Mundial de Parques, destaca la conexión entre el despojo y la pobreza, el cambio cultural y la pérdida de prácticas sociales y de subsistencia de las personas que viven en y alrededor de áreas protegidas (MacKay y Caruso, 2004). En general, la creación de áreas protegidas altera los derechos de

uso de suelo (Agrawal y Ostrom, 2001; Albers y Grinspoon, 1997; Jim y Xu, 2003; Panusittikorn y Prato, 2001; Roth, 2004; Wilshusen *et al*., 2002). En particular, observamos los siguientes ejemplos: casos de mayor control de los recursos por parte de las elites, tanto históricamente (Cleary, 2005; Sivaramakrishnan, 2003) como en la actualidad (Brothers, 1997; Colchester, 2003; Daily y Ellison, 2002; Hitchcock, 1995; Jeffery *et al*,. 2003; Peluso, 1993; Silori, 2001), la enajenación de la tierra y el mar, el arribo de usos de la tierra y el mar ajenos en sitios que rodean a las áreas protegidas (Foale y Manele, 2004; Haenn, 2005; Peters, 1998), y la criminalización de los pueblos indígenas por sus prácticas de uso del suelo (Freedman, 2002; Geisler *et al*., 1997). El impacto abrumador que deja la creación de áreas protegidas es uno que restringe el acceso y uso de los habitantes rurales mediante la legislación, la vigilancia y la privatización (Greenough, 2003; Horowitz, 1998; Igoe, 2003; Mahanty, 2003; Negi y Nautiyal, 2003; Santana, 1991). La expulsión de las personas es uno de los aspectos más polémicos y disputados de las áreas protegidas. Esta ha recibido mucha atención en los últimos años, especialmente por parte de antropólogos, pero la literatura dista mucho de ser sencilla. Borgerhoff y Coppolillo (2005: 36) señalan que los estudios sobre los desplazamientos constituyen un "amplio catálogo de abusos pasados, recientes y en curso". Esta afirmación es simplemente errónea y sorprende en una obra dedicada a abordar los problemas que la conservación puede provocar. En primer lugar, hay pocos estudios en comparación con la cantidad de áreas protegidas que existen; hemos encontrado tan solo unos 250 reportes que abarcan apenas unas 200 áreas protegidas. En segundo lugar, la literatura no constituye un catálogo, puesto que no contiene un sistema o un orden. En tercer lugar, y aún más preocupante, está el problema de que gran parte de lo que se ha escrito simplemente no es explicativo. Casi la mitad de las obras que examinamos se limitaban a mencionar el hecho del desplazamiento forzado, ya sea para comunicar el establecimiento de la protección o para advertir a los activistas que comunidades rurales marginadas, en particular los pueblos indígenas, enfrentan nuevas amenazas a sus formas de vida. Apenas 25% de los estudios examinan a detalle la anatomía del cambio en los modos de subsistencia de las poblaciones rurales tras el desplazamiento (Brockington, 2001). Esto es desafortunado, ya que

estos temas son a menudo negados por los Estados, las ong y otros actores con intereses en el desplazamiento de los habitantes de estas áreas. Los defensores de áreas protegidas se quejan, con razón, de que las críticas son anecdóticas (Sanderson y Redford, 2004).

Un puñado de estudios individuales detallan los costos económicos o los impactos sociales de personas desplazadas de áreas protegidas (Emerton, 2001; Geisler, 2003; Ghimire, 1997; Olwig y Olwig, 1979; Overton, 1979; Shyamsundar y Kramer, 1997; Tacconi y Bennett, 1995), y solo recientemente se ha intentado aplicar métodos convencionales para evaluar los impactos del desplazamiento a los casos provocados por la conservación y evaluar de forma clara sus consecuencias (Cernea, 2005; Schmidt-Soltau, 2003; 2005).

Un conjunto amplio de trabajos presta especial atención a regiones específicas o áreas protegidas individuales. Por ejemplo, ha habido un florecimiento de estudios en India (Ganguly, 2004, Guha, 1997; Rangarajan, 1996; Saberwal *et al*., 2000). Nepal también ha recibido una atención considerable, en especial el Parque Nacional Real Chitwan. El trabajo de McLean y Straed (2003) quizá sea el mejor estudio que hemos encontrado sobre las consecuencias de los desplazamientos a medida que estos se producen. Asimismo, se han producido muchos estudios de historia ambiental que reinterpretan la historia de los parques nacionales y las áreas protegidas en Estados Unidos, y se enfocan en el confinamiento de los pueblos nativoamericanos en reservaciones, simultáneamente a la creación de los parques nacionales en el oeste del país, a finales del siglo xix (Burnham, 2000; Catton, 1997; Jacoby, 2001; Keller y Turek, 1998; Nabakov y Lawrence, 2004; Spence, 1999). Destaca la creación de Yellowstone, el parque nacional pionero en el mundo, impulsado por elites de Occidente, pero que para mantenerlo libre de indígenas hostiles se requirió de los servicios del Ejército estadounidense, y para convencer a los turistas de que era seguro visitarlo fueron necesarios los servicios de expertos en mercadotecnia (Burnham, 2000; Spence, 1999). Mantener Yellowstone como la representación más pura de la naturaleza salvaje estadounidense ha implicado la invisibilización sistemática de la historia. El modelo Yellowstone se replicó rápidamente alrededor del oeste de Estados Unidos (Stevens, 1997) y los parques estadounidenses a su vez "fungieron como

modelos para los esfuerzos preservacionistas y para el despojo indígena alrededor del mundo" (Spence, 1999, p. 5). De manera insidiosa, Yellowstone se convirtió en un modelo para la creación de paisajes virtuales, en forma de parques temáticos, centros comerciales, hoteles internacionales y otros espacios diseñados para presentar a los consumidores experiencias genéricas de historias y paisajes asépticos (Wilson, 1992).

La inusual historia sudafricana de desalojos forzosos bajo el régimen del *apartheid* ofrece registros extraordinariamente fiables sobre quién fue trasladado y a qué costo, así como de un programa de restitución de tierras perdidas para la conservación de la biodiversidad. Estos registros han sido explorados mediante detalladas historias individuales en áreas protegidas específicas (Carruthers, 1995; Palmer *et al*., 2002), así como de amplias revisiones (Fabricius y de Wet, 2002; Magome y Fabricius, 2004). En otras partes de Sudáfrica, la situación de los bosquimanos san, expulsados de áreas protegidas, ha sido objeto de gran atención. (Hitchcock, 2001; Ikeya, 2001; Kuper, 2003; Suzman, 2002-2003). Sobre África del Este, se ha escrito bastante sobre los pastoralistas hablantes de Maa y la conservación (Galvin *et al*., 2002; Homewood y Rodgers, 1991; Igoe, 2003; 2004; Igoe y Brockington, 1999; McCabe, 2002).

La ausencia de algunas regiones en la literatura sobre áreas protegidas podría reflejar diferencias entre países. La falta de regiones europeas en las investigaciones muestra la falta relativa de conflictos causados por las áreas protegidas en este continente. Sin embargo, la plétora de material sobre África es testimonio del gran tamaño que caracteriza a las áreas protegidas africanas (Tabla 1), de la población predominantemente rural del continente, y de la combinación de Estados débiles y la imposición colonial, que dificulta mucho la planeación del desplazamiento. En Australia y América Latina, la carencia de estudios refleja el hecho de que las dinámicas y políticas de áreas protegidas funcionan de forma distinta en estas regiones. Australia ha experimentado menos desplazamientos para la conservación que lugares como África y América del Norte. Sin embargo, existen conflictos importantes sobre la autoridad de gestión en los parques y el impacto del turismo en las culturas aborígenes y los sitios sagrados (Cordell, 1993; Lawrence, 2000, Toyne y Johnston, 1991). En

América Latina, las comunidades indígenas observan las áreas protegidas como una oportunidad para proteger sus territorios tradicionales (Chapin, 2000; Winer, 2003), pero también han aprendido que las áreas protegidas pueden ser la tapadera de intereses comerciales externos (Nugent, 1994; Zamarenda, 1998).

Una conclusión sorprendente derivada de nuestra revisión es que el trabajo sobre pueblos indígenas es en particular poco explicativo respecto a los impactos específicos del desalojo. Aunque los logros de los activistas indígenas que se enfrentan al desplazamiento son considerables (Brosius, 2004), relativamente pocos estudios ofrecen observaciones detalladas. Asimismo, como argumenta Igoe (2005, pp. 7-8), este confinamiento conceptual de los indígenas como principales víctimas de los desplazamientos en zonas protegidas oculta dos desigualdades fundamentales. En primer lugar, entre grupos indígenas, algunos pueblos son más indígenas que otros. Los grupos san en Namibia, por ejemplo, se han convertido en una clase marginada y permanente de los trabajadores agrícolas. Los integrantes de este grupo no pueden articular los mismos reclamos sobre sus derechos indígenas como lo hacen otros grupos en la contigua Botswana (Sylvain, 2002). En segundo lugar, los pueblos indígenas no siempre constituyen las personas desplazadas más marginadas y empobrecidas por las áreas protegidas. Estudios en Indonesia (Li, 2000; 2005) y Sudáfrica (Kuper, 2003) demuestran que los descendientes de los grupos desplazados son a menudo una minoría significativa de la población rural en países en vías de desarrollo. También son, con frecuencia, los más marginados y menos diferenciados étnicamente. No obstante, su relación con el ambiente tiene profundas implicaciones para la conservación.

Existe una última carencia de información en nuestro conocimiento sobre el desplazamiento en áreas protegidas: sabemos poco sobre las tasas de uso y ocupación de las áreas protegidas. En lugar de una revisión global de las tasas, disponemos de un reducido número de estudios particulares que muestran tasas de ocupación de 56%-72% para parques nacionales y santuarios de vida silvestre en India (Kothari *et al*., 1989); 85% para parques nacionales en América del Sur (Amend y Amend, 1995); 70% para áreas protegidas en zonas tropicales bien pobladas (Bruner *et al*., 2001),

y 70%-100% para áreas protegidas en Myanmar, Mongolia y Kalimantan del Este (Bedunah y Schmidt, 2004; Jepson *et al*., 2002; Rao *et al*., 2002). El análisis de percepción remota de la actividad agrícola dentro de las áreas protegidas (empleando datos de áreas protegidas desde 2000, para aproximadamente con 44 000 registros) señala que la agricultura se practica en 29% de las áreas protegidas conocidas (McNeely y Scherr, 2003). Ciertamente es difícil entender las consecuencias del desplazamiento en áreas protegidas si no existe, en primer lugar, una buena revisión sobre las tasas de ocupación en estas áreas. No obstante, si estos muestreos son representativos, entonces las protestas actuales no son más que la punta del iceberg. Si la legislación vigente sobre conservación se aplicará de manera estricta en muchos países, el nivel y la tasa de desalojos aumentaría de manera considerable. Reportes recientes sobre India, por ejemplo, sugieren que casi cuatro millones de personas enfrentaron desalojos tras la realización de modificaciones en la política de áreas protegidas (Kothari, 2004). Geisler y de Sousa (2001) calculan que entre uno y dieciséis millones de personas en África podrían convertirse en refugiados ambientales de áreas protegidas. Si esto se torna realidad, el verdadero reto que enfrentarán la conservación y la antropología será cómo lidiar con este desplazamiento anunciado (Brockington *et al*., 2006).

El desplazamiento es entonces más inasible y complejo de lo que podría parecer. De hecho, son notables las ambigüedades que las áreas protegidas pueden producir. Las áreas protegidas dan lugar a nuevas clases de tierras que pertenecen al Estado, pero son también usadas por las comunidades locales para su subsistencia y necesidades sociales (Sato, 2000). Los parques nacionales a menudo son ambiguos en este sentido, pues convierten zonas históricamente utilizadas para la caza y el pastoreo en áreas que los habitantes locales no tienen permitido utilizar (Knudsen, 1999). En Nepal, las áreas de amortiguamiento restringen los derechos tradicionales de acceso y uso del suelo, causan conflictos y pérdidas económicas, y destruyen los sistemas de tenencia de la tierra, aunque no existe evidencia de que las zonas de amortiguamiento contribuyan a la conservación (Heinen y Mehta, 2000). Chatty (2002) demuestra que un proyecto de reinserción de orix en la Península Arábiga, aunque elogiado como una historia de

éxito en la conservación, en realidad modificó los derechos de uso del suelo, y el pueblo harasiis que ha convivido por siglos con los orix, ahora carece de derechos de pastoreo, lo que transforma a la caza furtiva en una opción de ingresos y subsistencia. Rae *et al*. (2002) muestran cómo las áreas protegidas en Siria sustituyen los sistemas habituales de tenencia de la tierra con nuevos esquemas regulatorios que despojan a los grupos de pastores, alteran las relaciones intra e intertribales y afectan las dinámicas locales comunitarias. En Nepal y Bután, las técnicas de gestión territorial que utilizan los parques nacionales para proteger la naturaleza, perturban la agricultura local y crean hostilidad entre las personas locales hacia la conservación en general (Seeland, 2000).

El conflicto a menudo reside en el centro del establecimiento y mantenimiento de las áreas protegidas. Esto se debe, en parte, a las torpes estrategias verticales de los Estados que no logran apreciar o trabajar con las prácticas y los intereses locales. Orlove (2002) ha documentado cómo los campesinos resistieron con éxito los intentos para establecer una reserva nacional en los juncales del lago Titicaca, en Perú, no se sabe si desde un inicio o debido a que las nuevas restricciones resultaron ser difíciles de conciliar con el manejo de los juncales. Los juncales eran ambientes antropogénicos por completo donde los campesinos plantaban, podaban y cuidaban de las camas de juncos según los niveles fluctuantes del lago. En otras ocasiones, la creación de áreas protegidas articula la eliminación física y simbólica de los habitantes originales (Neumann, 1998; Ranger, 1999; Spence, 1999). Una característica central del modelo Yellowstone fue la supresión de la historia social del uso del territorio de los nativos americanos e incluso de los nativos americanos en sí mismos (Meyer, 1996; Rasker, 1993). Los nativos americanos, al igual que los pueblos desplazados de las áreas protegidas alrededor del mundo, fueron obligados a rehabitar estos paisajes como proveedores de artesanías, entretenimiento y otros servicios requeridos por los visitantes. La vigilancia y el financiamiento de áreas protegidas requiere de una continua violencia de Estado (Neumann, 2004; Peluso, 1993).

Las áreas protegidas, como sucede con cualquier intervención para el desarrollo, también contribuyen a alimentar el conflicto social. Las zonas

de conservación transfronterizas en África, que pueden provocar desplazamientos e incentivar las tensiones étnicas, irónicamente, han buscado apoyo popular presentándose como parques para la paz (Duffy, 2005; Wolmer, 2003). Las disputas se producen por las fortunas e infortunios que traen consigo las áreas protegidas. Estos pueden darse entre ricos y pobres (McLean y Straede, 2003), castas (Paudel, 2005) o grupos étnicos (Nelson y Hossack, 2003). Las áreas protegidas a menudo son consideradas como uno de los medios por los cuales se ejerce violencia hacia los pueblos indígenas (Colchester, 2003; Colchester y Erni, 1999; Gray *et al*., 1998; Nelson y Hossack, 2003).

No obstante, con frecuencia el establecimiento de áreas protegidas ha resultado también en la creación de espacios liminales fuera del control del Estado. Algunos parques en África y América Latina han servido como escenarios para el desarrollo de movimientos guerrilleros (Dunn, 2003), así como para el narcotráfico (Stepp, 2005). Los parques de Estados Unidos albergan plantaciones de mariguana y laboratorios de metanfetamina, y también son una ruta empleada por las personas que buscan entrar al país de forma ilegal (Igoe, 2005). A veces los parques brindan oportunidades a las comunidades indígenas para eludir el control del Estado y otras incursiones en sus tierras. El Ute Mountain Tribal Park en Colorado se creó para prevenir la expropiación de tierras ute por parte del Servicio Estadounidense de Parques Nacionales (U.S. National Park Service, Igoe, 2004). El Parque Kuna, en Panamá, se estableció para prevenir la invasión de tierras kuna por agricultores que entraban a la costa atlántica desde el centro del país (Chapin, 2000). Algunas áreas de conservación se crean junto con comunidades locales y logran modificar los patrones de uso del suelo y del mar. La Reserva de la Biosfera Seaflower en Colombia se instituyó a partir de la identificación local de zonas pesqueras sobreexplotadas y del acuerdo local para convertir esas áreas en reservas donde se prohíbe la extracción (Friedlander *et al*., 2003). En algunos casos, áreas protegidas que pretendían modificar los derechos de uso de suelo dan lugar a una gestión territorial conjunta con derechos y responsabilidades, que recaen tanto en los residentes de las reservas como en los administradores de las áreas naturales, pero aun así los habitantes locales continúan perdiendo

derechos importantes sobre sus tierras agrícolas (Maikhuri *et al*., 2000). Esta pérdida afecta los modos de vida locales y las prácticas de subsistencia, y a menudo conlleva consecuencias negativas.

Cambios en las prácticas sociales

Las áreas protegidas y los esfuerzos de conservación tienen efectos profundos en las relaciones de género en todo el mundo (Agarwal, 1997; Ghimire y Pimbert, 1997; Schroeder, 1993). En la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala, los responsables del proyecto se enfocaron en los hombres como los "principales agentes del cambio social"; los planificadores en un principio prácticamente ignoraron a las mujeres (Sundberg, 2003, p. 733). El proyecto, sin embargo, sirvió para "alterar las estructuras de poder locales y las relaciones de género, creando espacios para nuevas formas de activismo ambiental y alianzas políticas" (2003: 734). Al ser desairadas, las mujeres empezaron a crear alianzas y a trabajar fuera de su familia inmediata. Esto permitió a las mujeres encontrar nuevas formas de constituirse como personas. En lugar de conformarse a sí mismas sólo mediante las interacciones familiares, las mujeres ampliaron sus redes sociales y sus redes de identidad (Sundberg, 2004). De forma parecida, en Costa Rica, la participación de las mujeres en proyectos destinados a la producción de artesanías para mercados turísticos les ha otorgado un poder económico del que carecían en el pasado (Vivanco, 2001). Los proyectos de artesanías que han surgido gracias a la conservación y el ecoturismo en Costa Rica han cambiado la forma en que las mujeres producen artesanías y las imágenes utilizadas en ellas. Las mujeres ahora incorporan imágenes del quetzal en sus diseños, aun cuando nunca antes hayan visto esas aves (Vivanco, 2001). En Tanzania, los acuerdos sobre el precio de las novias y la obtención de ingresos por parte de las mujeres han cambiado con el paso del tiempo debido a la disminución del número de cabezas de ganado por el desplazamiento (Brockington, 2001). El trabajo de Sullivan (2000) en Namibia ha demostrado que los intentos para enfrentar la exclusión económica de las políticas de conservación discriminaban y devaluaban el uso que hacen las mujeres de los recursos. Los esfuerzos de conser-

vación también cambian las formas en que las personas se perciben en relación con el entorno. En el pasado, los indígenas huaorani observaban al ambiente natural como algo inextricable a su mundo social (Holt, 2005). Hoy en día, perciben la naturaleza y la cultura como entidades separadas debido a su participación en la conservación. En algunos casos, las comunidades locales han comenzado a monitorear su propio consumo de fauna silvestre (Noss *et al*., 2004). Peters (1998) demuestra que prácticas socioecológicas profundamente arraigadas como el tavy en Madagascar han sido abordadas por los conservacionistas como prácticas ambientales que tienen poca o nula relevancia social. Estas prácticas, que los ecologistas y conservacionistas consideran simples formas de uso ambiental, se interrumpen o modifican en detrimento de la vida social y las costumbres locales. En algunos casos, por supuesto, el agotamiento de los recursos provoca cambios sociales como la intensificación del uso de la tierra y la dependencia de las economías de mercado (Putsche, 20000). Algunos autores señalan que el lenguaje del ambientalismo y la protección ha llegado a permear el lenguaje y el discurso local. Esta apropiación del discurso ambientalista se practica en el Parque Nacional Cerro Azul Meambar, en Honduras, cuando las personas desean disfrutar los beneficios del parque, aunque también funciona para modificar la percepción que tiene la gente sobre su relación con el entorno (Pfeffer *et al*., 2001).

En muchos proyectos, la descripción que se hace de los pueblos y su gente se simplifica para hacerlos comprensibles a los actores foráneos y gestores, y para que sus prácticas socioecológicas encajen en las categorías de paisajes protegidos de la iucn (Harmon, 2003). Entendemos este proceso como una acción tanto de gentrificación, que hace que las personas se ajusten a categorías ya existentes, como de simplificación, que reduce la complejidad de las prácticas y creencias sociales de las personas para que encajen en determinadas estructuras políticas. Los esfuerzos de conservación a menudo no responden de manera efectiva a las cambiantes necesidades sociales, políticas y económicas de las comunidades (Egenter y Labo, 2003). Estos esfuerzos tienden a fijar a las comunidades y pueblos en el tiempo y el espacio y no permiten cambios. Con frecuencia, los pueblos son calificados como difíciles y los proyectos considerados

fracasos cuando no se concuerdan con la imagen creada sobre ellos en la concepción del proyecto (West, 2001; 2006). En otros casos, los pueblos indígenas, sus saberes y prácticas ecológicas se sitúan temporalmente en el pasado y se presta poca atención a sus conocimientos actuales y sus usos de su entorno (English, 2000). Una suerte de virtualismo está en juego aquí — las personas son producidas de una manera y cuando no son de esa manera o cambian, se considera que fracasan—.

Observamos también cambios en las reivindicaciones identitarias por parte de actores no indígenas. En Australia han existido conflictos en la planeación de la protección de los bosques por la forma en que los australianos blancos reaccionan a los argumentos de los aborígenes sobre sus vínculos espirituales y sociales con la tierra (Trigger y Mudlock, 2005). A partir de la afirmación de los pueblos aborígenes sobre sus vínculos históricos con la tierra, los blancos han empezado a manifestar sus conexiones sociales y espirituales con la tierra. Otros autores muestran cómo los habitantes de las naciones ricas configuran su identidad como ecologistas mediante las representaciones que las ong hacen de los indígenas en los medios de comunicación y de cómo entienden su entorno (Weeks, 1999).

Algunos de los cambios más generalizados y de mayor alcance que produjeron las áreas protegidas se observan en el crecimiento del ecoturismo y la comodificación. Las empresas de ecoturismo suelen ir de la mano con las áreas protegidas. Si existe un área protegida, es probable que algún tipo de ecoturismo se desarrollé ahí, y si existen empresas de ecoturismo, es probable que algún área protegida se encuentre en los alrededores. Debido a esta conexión, las personas que habitan en y alrededor de áreas protegidas interactúan con el ecoturismo como una fuente de ingresos, como una serie de relaciones sociales que incorporan las ideas de naturaleza y cultura a zonas donde estas antes no existían, y como un vínculo con visitantes de otros lugares. Aporta nuevas formas de ver y utilizar el entorno de las personas en función de paisajes socioecológicos previos y crea nuevos límites (Forbes, 1995; Vivanco, 2001; West y Carrier, 2004).

El ecoturismo produce imágenes simplistas de los habitantes locales, sus usos y comprensiones de su entorno. A través del lente de estas imágenes

simplificadas, los funcionarios dirigen políticas y proyectos en las comunidades, y se culpa a los habitantes locales cuando fracasan los proyectos (Belsky, 1999). El ecoturismo también modifica la forma en que las personas comprenden su entorno (Vivanco, 2001), lo que puede suponer una presión sobre los recursos locales debido al número de turistas y al aumento de las actividades turísticas (Panusittikorn y Prato, 2001; Puntenney, 1990). El ecoturismo también puede conducir a un aumento de las expectativas económicas de las personas en las comunidades locales (Chapin, 1990; Foucault, 2002). En Yucatán, ha producido cambios en la dieta maya, incluyendo un aumento en la dependencia de productos comprados y un descenso de la nutrición en general (Leatherman y Goodman, 2005).

El dinero que puede generar el turismo a menudo se vincula a los parques y su administración al ecoturismo (Walpole *et al*., 2001). Pero existe una tensión en esta relación, pues el ecoturismo con frecuencia provoca conflictos y modifica los derechos de uso de suelo (Bookbinder *et al*., 1998), no cumple las promesas de otorgar beneficios a las comunidades (Alexander, 2000; Kiss, 2004; Kruger, 2005; Stone y Wall, 2004), daña el ambiente (Carrier y Macleod, 2005; Karan y Mather, 1985; Quiros, 2005; Savage, 1993; Zurick, 1992), y tiene muchas otras repercusiones sociales (Wallace y Diamante, 2005). De hecho, muchos han argumentado de forma repetida que el ecoturismo no es ni ecológica ni socialmente beneficioso (Carrier y MacLeod, 2005; West y Carrier, 2004), sin embargo, persiste como una estrategia para la conservación y el desarrollo.

En el Parque Nacional Cuc Phuong, donde algunos habitantes muong han sido reubicados afuera del área protegida hacia zonas de amortiguamiento, el ecoturismo ha provocado conflictos entre las comunidades muong al crear diferencias de clase entre quienes tienen dinero gracias al turismo y quienes no; ha creado una imagen de las personas que habitan el parque como indígenas y de aquellos que han salido del parque como aldeanos, y creó una dependencia de la conservación para el empleo y los ingresos (Rugendyke y Son, 2005). Este parque no es el único lugar donde las personas han sido desplazadas por el ecoturismo (Weinberg *et al*., 2002) o donde existe una dependencia económica hacia el turismo (Macleod, 2001; Putsche, 2000). En Costa Rica, 70% del ingreso regional cerca de Monte Verde proviene del ecoturismo (Vivanco, 2001).

También observamos el surgimiento de diferencias socioeconómicas entre las comunidades involucradas con empresas ecoturísticas en áreas protegidas y quienes no tienen esta oportunidad en Jordania (Schneider y Burnett, 2000) y Nepal (Mehta y Kellert, 1998), así como una distribución desigual de beneficios en Nepal (Bookbinder *et al*., 1998) e Indonesia (Walpole *et al*., 2001). Los conflictos en torno al ecoturismo también surgen en Australia (Slattery, 2002), Tasmania (Kirkpatrick, 2001), y Papúa Nueva Guinea (West, 2006; West y Carrier, 2004). Abel (2003) muestra que, en Bonaire, el ecoturismo implica una enorme perturbación de los sistemas socioecológicos al alterar las relaciones entre los pueblos y las relaciones de producción en toda la isla. Asimismo, Abel muestra cómo el ecoturismo internacionaliza las economías en formas que no necesariamente benefician a las personas que viven en y alrededor de áreas protegidas, mientras que Dixon *et al*. (1993) muestran cómo el turismo de buceo en Bonaire afecta de forma negativa la salud de los arrecifes y, por ende, la subsistencia de algunas personas.

Aun sin el ecoturismo, las áreas protegidas ocasionalmente pueden brindar empleo a los habitantes rurales (Whitesell, 1996), aunque en algunos casos las áreas protegidas convierten a las personas en mano de obra, crean nuevos tipos de subjetividades (Sodikof, 2005), empleo para extranjeros (Peters, 1998) y empleo para las elites nacionales (Baviskar, 2003). Las áreas protegidas también brindan cierta oportunidad para la creación de capacidad científica en el país (Aguilar-Stoen y Dhillion, 2003; Danielsen *et al*., 2005; Sivaramakrishnan, 2003). Sin embargo, las ong no siempre cumplen con estas promesas de capacitación (Haley y Clayton, 2003). Las áreas protegidas también generan, en ocasiones, una dependencia de los proyectos de conservación para crear oportunidades de empleo tanto para los habitantes de las zonas rurales como para los propietarios de las tierras (Brandon *et al*., 2005; Charles, 1999; Lane, 2002; Lawson, 2003; Westman, 1990).

Sin embargo, más importantes que la creación o distribución de empleo son las consecuencias de la comodificación, que puede acarrear la incorporación a los sistemas de mercado (Peters, 1998; Sundberg, 2003; Toly, 2004; West, 2006; Wilshusen *et al*., 2002). El ecoturismo puede hacer que las áreas protegidas, así como la experiencia y la interacción con ellas,

tengan un valor económico en función del consumo que de ellas hagan los visitantes (Alexander, 2000; King y Stewart, 1996; Panusittikorn y Prato, 2001; Vaughan, 2000). Mientras que las interacciones anteriores de la población rural con las plantas y los animales eran formas sociales únicas de relacionarse con su entorno, la valoración económica de estas plantas y animales borra las formas locales de ver y ser (Brown, 1998; Jeffery *et al*., 2003; King y Stewart, 1996; Tsing, 2003).

MacDonald (2004) ha demostrado que la caza deportiva internacional del íbice en Pakistán, impulsada por narrativas poco sólidas sobre su escasez, desplaza las prácticas y creencias de la caza local. La mercantilización de especies trofeo se convierte en un medio de control y dominación. De hecho, los proyectos integrados de conservación y desarrollo (conocidos como icdps o icads en inglés) se basan en la idea de que las personas que viven en y alrededor de las áreas pueden valorar su entorno como "diversidad biológica in situ" si se vinculan mentalmente con el mercado y los ingresos monetarios (Filer, 2004; Van Helden, 1998; 2001; Wagner, 2003; West, 2005; 2006).

Estos proyectos se enfocan siempre en alguna forma de comercialización de las plantas, animales, lugares o personas (Brandon y O'Herron, 2004; Cameron, 1996), pero rara vez consideran los sistemas locales de valoración (Sillitoe, 2001; West, 2005). Adicionalmente, los proyectos de icad a menudo exacerban las diferencias sociales ya existentes (Cameron, 1996; Horowitz, 1998) y crean expectativas que no se cumplen (Foale, 2001). La literatura sobre conservación es un tanto escéptica respecto a la efectividad de estos proyectos para la conservación (Wells *et al*., 1999).

En algunos casos, cuando los animales se convierten en mercancías en la mente de la población local, esta toma represalias contra los parques nacionales debido a las cargas financieras que se les imponen cuando matan animales salvajes (Seeland, 2000). Ciertas especies han pasado de ser poco conocidas o valoradas por las comunidades locales a ser mercancías de alto valor (Vivanco, 2001). La mercantilización de las plantas puede eliminar su valor social y conducir a la sobreproducción dentro de áreas protegidas (Merlin y Raynor, 2005). Los habitantes locales y su imagen

también pueden convertirse en mercancías (Krech, 2005), así como su propiedad intelectual sobre el entorno (Brush, 1993; Filer, 2000).

Conclusiones

¿Cómo podrían los antropólogos pensar más cuidadosamente sobre los efectos materiales de las áreas protegidas en futuras investigaciones? Lefebvre (1991), Smith (1990; 1996) y Harvey (1989) argumentan que el espacio se produce mediante prácticas sociales, la ciencia, la planeación y la tecnología, y el que el espacio está vivo y se comprende por medio de símbolos, del lenguaje y de imágenes (Lefebvre, 1991: 38-39). Con *espacio*, estos autores se refieren al mundo que nos rodea, tal como se experimenta material y simbólicamente. Aquí entendemos por *espacio* lo mismo que por *entorno*, el término que utilizamos para describir el mundo en el que viven las personas y con el que conviven cuando hablamos de áreas protegidas, para no replicar términos culturalmente sesgados como *ambiente*, *naturaleza*, *recursos naturales* o *espacios naturales*. Los antropólogos han utilizado de manera provechosa las ideas sobre la producción del espacio para superar debates en torno a la construcción social y los efectos materiales en ámbitos de análisis no relacionados con el ambiente (Low, 1996), y los geógrafos han retomado estas ideas para pensar sobre la producción de los espacios naturales en proyectos de conservación (Katz, 1998). Nos gustaría ver más análisis sobre cómo las áreas protegidas producen el espacio tanto discursiva, como sugiere Brosius (1999a), como materialmente. ¿Cómo las áreas protegidas crean ciertos tipos de espacios? ¿Qué efecto tiene la creación de nuevos lugares mediante intervenciones de conservación sobre los sitios que las topologías de conservación han reconfigurado de forma simbólica y material? ¿Cómo la producción de espacio altera las relaciones locales de las personas con su entorno? ¿Cómo alteran la forma en que las personas usan y asignan sentido a sus entornos?

Este tipo de análisis existe en la literatura sobre áreas protegidas de forma embebida, pero, en la mayoría de los casos, la formación de nuevos tipos de espacio y lugar no se aborda de manera explícita (Arias y Nations, 1992; Austin *et al*., 1997; Baviskar, 2003; Bryant, 2000; Duffy, 2005; Silori, 2001; Slattery, 2002; Westman, 1990). Algunos autores han

analizado en específico la producción espacial en relación con la creación de la naturaleza en general (Braun, 2002; West, 2006), el ecoturismo (Carrier y Macleod, 2005), la cartografía y la conservación (Hughes, 2005; Sletto, 2002), el establecimiento de los habitantes locales en ciertos tipos de espacios (Whitesell, 1996), las implicaciones de y para las ong (Sundberg, 1998), el desplazamiento (McLean y Straede, 2003) y, por último, el papel de las prácticas discursivas en línea y en oficinas en Nueva York y Washington, D. C., para rehacer el mundo (Weeks, 1999).

El estudio de Moore (1998) sobre las políticas ambientales y la historia en los alrededores del área protegida del río Kaerezi en el Altiplano Oriental de Zimbabwe constituye un buen ejemplo sobre la dirección hacia la que nos gustaría orientar el trabajo futuro. Él argumenta a favor de "entender el paisaje como la sedimentación histórica de procesos simbólicos y materiales", donde destaca las "construcciones culturales contrapuestas que reivindican derechos sobre los recursos y el ambiente" (379). Muestra cómo surgen los paisajes, cómo son profundamente sociales y cómo el impulso de la conservación transforma el carácter social del entorno de las personas. También problematiza al Estado, las comunidades, los campesinos y a los conservacionistas mostrando la complejidad de la producción social del espacio.

Adicionalmente, Brockington (2002: 18, 25, 28) describe cómo diversas formas de producción espacial moldean y dan forma a quienes afirman pertenecer a un determinado grupo étnico o a quienes le es asignada su pertenencia a él. Lo social se simplifica para ajustarlo a las nuevas producciones espaciales de la conservación. Esto facilita la administración y el diseño de políticas públicas (2002: 25) y permite que las prácticas socioecológicas de las personas se ajusten a las categorías de áreas protegidas de la iucn (Harmon, 2003). Por ende, la conservación, al igual que colonialismo, solidifica ciertas identidades y etnicidades (Hodgson, 2001; Li, 2000) y las confina en espacios y lugares específicos (Appadurai, 1988).

Estas producciones espaciales también afectan las formas de valoración del entorno que se aplican o se toman en serio. Kaus (1993) demuestra que la Reserva de la Biósfera Mapimí en México, dividida en ocho zonas

diferentes, constituye una nueva producción del espacio profundamente distinta a la división del sitio, propia de los pueblos locales. También explica que los habitantes locales y los investigadores tienen ideas distintas por completo sobre lo que contiene el territorio de la reserva y su importancia, y sistemas totalmente diferentes para valorar las plantas, animales y procesos naturales.

Asimismo, queremos alentar los estudios sobre la valoración por y para las personas que viven fuera de las áreas protegidas. Harmon (2003) discute once valores intangibles derivados de las áreas protegidas: recreativo, terapéutico, espiritual, cultural, identitario, existencial, artístico, estético, educativo, de sosiego, e investigación científica y monitoreo. Estos valores pueden considerarse como efectos sociales de las áreas protegidas a medida que transforman la vida social y el bienestar de quienes visitan los parques y de quienes viven en ellos. Los aficionados, turistas, artistas, científicos y otras personas que utilizan las áreas protegidas deben ser estudiados.

Por último, nos gustaría ver más estudios enfocados en específico al proceso de simplificación que ocurre cuando los biólogos y otros científicos naturales escriben, piensan e intentan regular las relaciones sociales entre las personas y su entorno. En este proceso de simplificación, las ricas y variadas interacciones sociales con lo que los científicos naturales consideran como ambiente se reducen a unas pocas cuestiones o temas fáciles de transmitir y representar. Observamos que este proceso sucede en dos niveles. Primero, se simplifican los usos e interpretaciones que hacen las personas de su entorno para ser vistos como recursos que pueden ser utilizados (Tsing, 2003; West, 2005), y se les considera dentro de una escala de autenticidad que va desde el nativo ecológicamente prístino hasta el nativo desmerecido, pasando por el campesino, etcétera (Igoe, 2005; West, 2001). En cierto sentido, se trata de un recuento del paradigma de la evolución unilineal de la antropología del siglo XVIII.

En conclusión, reiteramos que las áreas protegidas son una expresión de lo que se ha llamado globalización. La atención contemporánea en los aspectos tecnológicos de la globalización (como es la comunicación rápida y los sistemas y redes de información, el transporte eficaz y el movimiento de personas, dinero e ideas) quizá ha provocado que la globalización parezca

poco relevante para un campo que procura la conservación de un estado natural. Al mismo tiempo, críticas político económicas como la que realizan los geógrafos marxistas se aplican a una escala que no considera las prácticas individuales (idiosincráticas) y las creencias de las comunidades locales. Abogamos por una antropología de áreas protegidas que subsane este vacío, una que atienda las economías políticas de la globalización y los sutiles, pero profundos, efectos sociales locales de la producción de naturaleza y ambiente en lugares donde esas categorizaciones sobre entorno de las personas no existían sino hasta hace poco.

Agradecimientos

Los autores en su conjunto desean agradecer a los editores del *Annual Review of Anthropology* y a los miembros del seminario de áreas protegidas de los parques Paige West que tuvo lugar en otoño de 2006. Paige West desea reconocer a la American Association of University Women y al American Council of Learned Societies por las becas que recibió mientras trabajaba en este capítulo. Dan Brockington desea agradecer el apoyo de una beca esrc Fellowship (res 000 27 0174) que recibió mientras trabajaba en este capítulo.

Referencias

Abel T. 2003. Understanding complex human ecosystems: the case of ecotourism on Bonaire. Conserv. Ecol. 7(3):10–26.

Adams C. 2003. Pitfalls of synchronicity: a case study of the Caicaras in the Atlantic rainforest of south-eastern Brazil. See Anderson & Berglund 2003, 19–31.

Adams WM. 2004. Against Extinction: The Story of Conservation. London: Earthscan.

Agrawal A, Ostrom E. 2001. Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal. Polit. Soc. 29(4): 495–514.

Agarwal B. 1997. Environmental action, gender equity and women's participation. Dev. Change 28(1): 1–28.

Aguilar-Støen, M. y S. S. Dhillon. (2003). Implementation of the Convention on Biological Diversity in Mesoamerica: environmental and developmental perspectives. *Environmental Conservation*, *30*(2), 131-138.

Albers, H. J. y E. Grinspoon. (1997). A comparison of the enforcement of access restrictions between Xishuangbanna Nature Reserve (China) and Khao Yai National Park (Thailand). *Environmental Conservation*, *24*, 351-362.

Alexander, S. E. (2000). Resident attitudes towards conservation and black howler monkeys in Belize: the Community Baboon Sanctuary. *Environmental Conservation*, *27*(4), 341-350.

Amend, S. y T. Amend. (1995). *National parks without people? The South American experience*. IUCN.

Anderson, D. G. y E. Berglund (eds.). (2003). *Ethnographies of conservation: environmentalism and the distribution of privilege*. Berghahn Books.

Anderson, D. G. y K. Ikeya. (2001). *Parks, property and power: managing hunting practice and identity within state policy regimes*. Senri Ethnological Studies 59. National Museum of Ethnology.

Appadurai, A. (1988). Putting hierarchy in its place. *Cultural Anthropology*, *3*(1), 36-49.

Arias, O. y J. D. Nations. (1992). A call for Central American peace parks." En S. Annis (ed.), *Poverty, natural resources, and public policy in Central America* (43-58). Overseas Development Council.

Austin, D., R. Stoffle y M. N. Zedeño. (1997). Landmark and landscape: a contextual approach to the management of American Indian resources. *Culture & Agriculture*, *19*(3), 123-129.

Austin, R. (2003). *Environmental movements and fisherfolk participation on a coastal frontier, Palawan Island, Philippines* [tesis de doctorado, University of Georgia].

Baviskar, A. (2003). States, communities and conservation: the practice of ecodevelopment in the Great Himalayan National Park. En V. Saberwal y M. Rangarajan (eds.), *Battles over nature: science and the politics of conservation* (256-283). Permanent Black.

Bedunah, D. J. y S. M. Schmidt. (2004). Pastoralism and protected area management in Mongolia's Gobi Gurvansaikhan National Park. *Development and Change*, *35*(1), 167-191.

Belsky, J. M. (1999). Misrepresenting communities: the politics of community-based rural ecotourism in Gales Point Manatee, Belize. *Rural Sociology*, *64*(4), 641-667.

Bishop, K., N. Dudley, A. Phillips y S. Stolton. (2004). *Speaking a common language: the uses and performance of the iucn system of management categories for protected areas*. Cardiff University / IUCN / UNEP-WCMC.

Bookbinder, M. P., E. Dinerstein, A. Rijal, H. Cauley y A. Rajouria. (1998). Ecotourism's support of biodiversity conservation. *Conservation Biology*, *12*(6), 1399-1404.

Borgerhoff M. y P. Coppolillo. (2005). *Conservation: linking ecology, economics and culture*. Princeton University Press.

Brandon, K. (2004). The policy context for conservation in Costa Rica: model or muddle? En G. Frankie, A. Mata y S. B. Vinson (eds.), *Biodiversity conservation in Costa Rica: learning the lessons in a seasonal dry forest* (299-311). University of California Press.

Brandon, K., L. J. Gorenflo, A. S. L. Rodrigues y R. W. Waller. (2005). Reconciling biodiversity conservation, people, protected areas, and agricultural suitability in Mexico. *World Development*, *33*(9), 1403-1418.

Brandon, K. y M. O'Herron. (2004). Parks, projects, and policies: a review of three Costa Rican icdps. En T.O, McShane y M. P. Wells (eds.), *Getting biodiversity projects to work* (154-180). Columbia University Press.

Braun, B. (2002). *The intemperate rainforest: nature, culture, and power on Canada's West Coast*. University of Minnesota Press.

Brechin, S. R., P. R. Wilshusen, C. L. Fortwangler y P. C. West (eds.). (2003). *Contested nature: promoting international biodiversity with social justice in the twenty-first century*. State University of New York Press.

Brockington, D. (2001). Women's income and livelihood strategies of dispossessed pastoralists: the case of Mkomazi Game Reserve. *Human Ecology*, *29*, 307-338.

Brockington, D. (2002). *Fortress conservation: the preservation of the Mkomazi Game Reserve, Tanzania*. James Currey.

Brockington, D., J. Igoe y K. Schmidt-Soltau. (2006). Conservation, human rights, and poverty reduction. *Conservation Biology*, *20*(1), 250-252.

Brosius, J. P. (1999a). Analyses and interventions: anthropological engagements with environmentalism. *Current Anthropology*, *40*(3), 277-309.

Brosius, J. P. (1999b). Green dots, pink hearts: displacing politics from the Malaysian Rain Forest. *American Anthropologist*, *101*(1), 36-57.

Brosius, J. P. (2004). Indigenous peoples and protected areas at the World Parks Congress. *Conservation Biology*, *18*(3), 609-612.

Brosius, J. P., A. Tsing y C. Zerner (eds.). (2005). *Communities and conservation: histories and politics of community-based natural resource management*. AltaMira Press.

Brothers, T. S. (1997). Deforestation in the Dominican Republic: a village-level view. *Environmental Conservation*, *24*, 213-223.

Brown, K. (1998). The political ecology of biodiversity, conservation and development in Nepal's Terai: confused meanings, means and ends. *Ecological Economics*, *24*(1), 73-87.

Bruner, A. G., R. E. Gullison, R. E. Rice y G. A. B. da Fonseca. (2001). Effectiveness of parks in protecting tropical biodiversity. *Science*, *291*(5501), 125-128.

Brush, S. B. (1993). Indigenous knowledge of biological resources and intellectual property rights: the role of anthropology. *American Anthropologist*, *95*(3), 653-671.

Bryant, R. L. (2000). Politicized moral geographies: debating biodiversity conservation and ancestral domain in the Philippines. *Political Geography*, *19*, 673-705.

Burnham, P. (2000). *Indian country, God's country: native Americans and national parks*. Island Press.

Cameron, M. M. (1996). Biodiversity and medicinal plants in Nepal: involving untouchables in conservation and development. *Human Organization*, *55*(1), 84-86.

Carrier, J. G. (2004). Introduction. En J. G. Carrier (ed.), *Confronting environments: local environmental understanding in a globalising world* (pp. 1-29). AltaMira Press.

Carrier, J. G. y D. V. L. Macleod. (2005). Bursting the bubble: the socio-cultural context of ecotourism. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, *11*(2), 315-333.

Carrier, J. G. y D. Miller. (1998). *Virtualism: a new political economy*. Berg.

Carruthers, J. (1995). *The Kruger National Park: a social and political history*. University of Natal Press.

Castagna, C. N. (2005). *The "Wylding" of Te Urewera National Park: analysis of (re)creation discourses in Godzone (Aotearoa/New Zealand)* [tesis de doctorado, University of Hawaii].

Catton, T. (1997). *Inhabited wilderness: Indians, Eskimos, and national parks in Alaska*. University of New Mexico Press.

Cernea, M. M. (2005). Concept and method: applying the irr model in Africa to resettlement and poverty. En I. Ohta e Y. D. Gebre (eds.), *Displacement risks in Africa: refugees, resettlers and their host population* (195-258). Kyoto University Press.

Chape, S., S. Blyth, L. Fish, P. Fox y M. Spalding (eds.). (2003). *United Nations List of protected areas*. UNEP-WCMC.

Chape, S., J. Harrison, M. Spalding e I. Lysenko. (2005). Measuring the extent and effectiveness of protected areas as an indicator for meeting global biodiversity targets. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, *360*, 443-455.

Chapin, M. (1990). The silent jungle: ecotourism among the Kuna indians of Panama. *Cultural Survival Quarterly*, *14*(1), 42-45.

Chapin, M. (2000). *Defending Kuna Yala*. usaid Biodiversity Support Program.

Chapin, M. (2004). A challenge to conservationists. *Worldwatch*, *17*(6), 17-31.

Charles, J. N. (1999). Involvement of native Americans in cultural resources programs. *Plains Anthropologist*, *44*(170), 25-35.

Chatty, D. (2002). Animal reintroduction projects in the Middle East: conservation without a human face. En D. Chatty y M. Colchester (eds.), *Conservation and mobile indigenous peoples: displacement, forced settlement and sustainable development* (227-243). Berghahn Books.

Chatty, D. y M. Colchester (eds.). (2002). *Conservation and mobile indigenous peoples: displacement, forced settlement and sustainable development*. Berghahn Books.

Cleary, M. (2005). Managing the forest in colonial Indochina c. 1900-1940. *Modern Asian Studies*, *39*(2), 257-283.

Colchester, M. (2003). *Salvaging nature: indigenous peoples, protected areas and biodiversity conservation*. World Rainforest Movement / Forest Peoples Programme.

Colchester, M. y C. Erni. (1999). *Indigenous peoples and protected areas in South and Southeast Asia: from principles to practice*. IWGIA.

Cordell, J. (1993). Who owns the land? Indigenous involvement in protected areas. En E. Kempf (ed.), *The law of the mother: indigenous peoples and protected areas* (104-113). Earthscan.

Daily, G. C. y K. Ellison. (2002). Costa Rica: paying mother nature to multitask. En G. C. Daily y K. Ellison (eds.), *The new economy of*

nature: the quest to make conservation profitable (165-188). Island Press/Shearwater.

Danielsen, F., N. Burgess y A. Balmford. (2005). Monitoring matters: examining the potential of locally based approaches. *Biodiversity and Conservation*, *14*, 2507-2522.

Dixon, J. A., L. F. Scura y T. van't Hof. (1993). Meeting ecological and economic goals—marine parks in the Caribbean. *Ambio*, *22*(2-3), 117-125.

Doane, M. (2001). *Broken grounds: the politics of the environment in Oaxaca, Mexico* [tesis de doctorado, City University of New York].

Dove, M. R. (2003). Forest discourses in South and Southeast Asia: a comparison with global discourses. En P. Greenough y A. Tsing (eds.), *Nature in the global south: environmental projects in South and Southeast Asia* (103-123). Duke University Press.

Duffy, R. (2005). The politics of global environmental governance: the powers and limitations of transfrontier conservation areas in Central America. *Review of International Studies*, *31*(2), 307-323.

Dunn, K. (2003). National parks and human security in East Africa. En A. Biel (ed.), *Proceedings of beyond the arch: community conservation in Greater Yellowstone and East Africa* (61-74). National Park Service.

Ediger, Virginia L. (2005). *Natural experiments in conservation ranching: the social and ecological consequences of diverging land tenure in Marin County, California* [tesis de doctorado, Stanford University].

Egenter, C. y M. Labo. (2003). In search of equitable governance models for indigenous peoples in protected areas: the experience of Kayan Mentarang National Park. *Policy Matters*, *12*, 248-253.

Emerton, L. (2001). The nature of benefits and the benefits of nature: why wildlife conservation has not economically benefited communities in Africa. En D. Hulme y M. Murphree (eds.), *African wildlife and livelihoods: the promise and performance of community conservation* (208-226). James Currey.

English, A. (2000). An emu in the hole: exploring the link between biodiversity and aboriginal cultural heritage in New South Wales, Australia. *Parks*, *10*, 13-25.

Erazo, J. S. (2003). *Constructing autonomy: indigenous organizations, governance, and land use in the Ecuadorian Amazon, 1964-2001* [tesis de doctorado, University of Michigan].

Errington, F. y D. Gewertz. (2001). On the generification of culture: from blow fish to Melanesian. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, *7*, 509-525.

Escobar, A. (1995). *Encountering development: the making and unmaking of the third world*. Princeton University Press.

Fabricius, C. y C. de Wet. (2002). The influence of forced removals and land restitution on conservation in South Africa. En D. Chatty y M. Colchester (eds.), *Conservation and mobile indigenous peoples: displacement, forced settlement and sustainable development* (142-157). Berghahn Books.

Filer, C. (2000). *How can Western conservationists talk to Melanesian landowners about indigenous knowledge?* RMAP Working Paper No. 27, Research School for Pacific and Asian Studies, Australian National University.

Filer, C. (2004). Hotspots and handouts: illusions of conservation and development in Papua New Guinea [ponencia en *Bridging Scales and Epistemologies: Linking Local Knowledge with Global Science Conference*, Alejandría, Egipto].

Foale, S. (2001). "Where's our development?" Landowner aspirations and environmentalist agendas in Western Solomon Islands. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, *2*(2), 44-67.

Foale, S. y B. Manele. (2004). Social and political barriers to the use of marine protected areas for conservation and fishery management in Melanesia. *Asia Pacific Viewpoint*, *45*, 373-386.

Forbes, A. (1995). Heirs to the land: mapping the future of the Makalu-Barun. *Cultural Survival Quarterly*, *18*(4), 69.

Foucault, V. S. A. (2002). Community-based ecotourism management moving towards sustainability in Ventanilla, Oaxaca, Mexico. *Ocean & Coastal Management*, *45*(8), 511-529.

Freedman, E. (2002). When indigenous rights and wilderness collide: prosecution of native Americans for using motors in Minnesota's Boundary Waters Canoe Wilderness Area. *American Indian Quarterly*, *26*(4), 378-392.

Friedlander, A., J. S. Nowlis, J. A. Sanchez, R. Appeldoorn, P. Usseglio *et al.* (2003). Designing effective marine protected areas in Seaflower Biosphere Reserve, Colombia, based on biological and sociological information. *Conservation Biology*, *17*(6), 1769-1784.

Ganguly, V. (2004). *Conservation, displacement and deprivation: Maldhari of Gir Forest of Gujarat*. Indian Social Institute.

Garner, A. (2002). *Contemporary forest landscapes in Britain: ownership, environmentalism and leisure* [tesis de doctorado, University College London].

Galvin, K. A., J. Ellis, R. B. Boone, A. L. Magennis, N. M. Smith *et al.* (2002). Compatibility of pastoralism and conservation? A test case using integrated assessment in the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania. En D. Chatty y M. Colchester (eds.), *Conservation and mobile indigenous peoples: displacement, forced settlement and sustainable development* (36-60). Berghahn Books.

Geisler, C. (2003). Your park, my poverty: using impact assessment to counter displacement effects of environmental greenlining. En S. R. Brechin, P. Wilshusen, C. L. Fortwangler y P. C. west (eds.), *Contested nature: promoting international biodiversity with social justice in the twenty-first century* (217-229). State University of New York Press.

Geisler, C. y R. de Sousa. (2001). From refuge to refugee: the African case. *Public Administration and Development*, *21*, 159-170.

Geisler, Charles, R. Warner y A. Barton. (1997). The wandering commons: a conservation conundrum in the Dominican Republic. *Agriculture and Human Values*, *14*, 325-335.

Ghimire, K. y M. Pimbert (eds.). (1997). *Social change and conservation*. James & James / Earthscan.

Ghimire, K. B. (1997). Conservation and social development: an assessment of wolong and other panda reserves in China. En K, Ghimire y M. Pimbert (eds.), *Social change and conservation* (pp. 187-213). James & James / Earthscan.

Gillison, G. (1980). Images of nature in Gimi thought. En C. MacCormack y M. Strathern (eds.), *Nature, culture and gender* (pp. 143-173). Cambridge University Press.

Goldman, M. (2001). Constructing an environmental state: eco-governmentality and other transnational practices of a 'green' World Bank. *Social Problems*, *48*(4), 499-523.

Gray, A., A. Parellada y H. Newing. (1998). *From principles to practice. indigenous peoples and biodiversity conservation in Latin America. Proceedings of the Puscallpa Conference.* iwgia.

Greenough, P. (2003). Pathogens, pugmarks, and political emergency: the 1970s South Asian debate on nature. En P. Greenough y A. Tsing (eds.), *Nature in the global South: environmental projects in South and Southeast Asia* (201-30). Duke University Press.

Greenough, P. y A. Tsing (eds.). (2003). *Nature in the global south: environmental projects in South and Southeast Asia*. Duke University Press.

Guha, R. (1997). Radical American environmentalism and wilderness preservation: a third world critique. En R. Guja y J. Martinez-Alier (eds.), *Varieties of environmentalism: essays North and South* (71-83). Earthscan.

Gustavo, A. (2005). *Conservation, sustainable development, and 'traditional' people: pataxo ethnoecology and conservation paradigms in Southern Bahia, Brazil* [tesis de doctorado, Cornell University].

Haenn, N. (2005). *Fields of power, forests of discontent: culture, conservation, and the state in Mexico*. University of Arizona Press.

Haley, M. y A. Clayton. (2003). The Role of ngos in environmental policy failures in a developing country: the mismanagement of Jamaica's Coral Reefs. *Environmental Values*, *12*(1), 29-54.

Harmon, D. (2003). Intangible values of protected areas. *Policy Matters*, *12*, 9-22.

Harvey, D. (1989). *The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change*. Blackwell.

Heinen, J. T. y J. N. Mehta. (2000). Emerging issues in legal and procedural aspects of buffer zone management with case studies from Nepal. *Journal of Environment and Development*, *9*(1), 45-67.

Hitchcock, R. K. (1995). Centralisation, resource depletion and coercive conservation among the Tyua of the Northeastern Kalahari. *Human Ecology*, *23*, 168-198.

Hitchcock, R. K. (2001). "Hunting is our heritage": the struggle for hunting and gathering rights among the San of Southern Africa. En T. Anderson y K. Ikeya (eds.), *Hunter-gatherers in modern society: conflict, resistance, and self-determination* (139-156). Berghahn.

Hodgson, D. L. (2001). *Once intrepid warriors: gender, ethnicity, and the cultural politics of Maasai development*. Indiana University Press.

Holt, F. L. (2005). The catch-22 of conservation: indigenous peoples, biologists, and cultural change. *Human Ecology*, *33*(2), 199-215.

Homewood, K. M. y W. A. Rodgers. (1991). *Maasailand ecology: pastoralist development and wildlife conservation in Ngorongoro, Tanzania*. Cambridge University Press.

Horowitz, L. S. (1998). Integrating indigenous resource management with wildlife conservation: a case study of Batang Ai National Park, Sarawak, Malaysia. *Human Ecology*, *26*(3), 371-403.

Hughes, D. M. (2005). Third nature: making space and time in the Great Limpopo Conservation Area. *Cultural Anthropology*, *20*(2), 157-184.

Hulme, D. y M. Murphree (eds.). (2001). *African wildlife and livelihoods: the promise and performance of community conservation*. Heinemann.

Igoe, J. (2003). Scaling up civil society: donor money, ngos and the pastoralist land rights movement in Tanzania. *Development and Change*, *34*, 863-885.

Igoe, J. (2004). *Conservation and globalisation: a study of national parks and indigenous communities from East Africa to South Dakota*. Wadsworth / Thomson Learning.

Igoe, J. (2005). Global indigenism and spaceship Earth: convergence, space, and re-entry friction. *Globalizations*, *2*(1), 1-13.

Igoe, J. y D. Brockington. (1999). *Pastoral land tenure and community conservation: a case study from North-East Tanzania.* Pastoral Land Tenure Series 11. iied.

Ikeya, K. (2001). Some changes among the San under the influence of relocation plan in Botswana. En T. Anderson y K. Ikeya (eds.), *Hunter-gatherers in modern society: conflict, resistance, and self-determination* (183-198). Berghahn.

Jacoby, K. (2001). *Crimes against nature: squatters, poachers, thieves and the hidden history of American conservation*. University of California Press.

Jeffery, R., N. Sundar, A. Mishra, N. Peter y P. J. Tharakan. (2003). A move from minor to major: competing discourses of non-timber forest products in India. En P. Greenough y A. Tsing (eds.), *Nature in the global South: environmental projects in South and Southeast Asia* (79-102). Duke University Press.

Jepson, P., F. Momberg y H. van Noord. (2002). A review of the efficacy of the protected area system of East Kalimantan Province, Indonesia. *Natural Areas Journal*, *22*(1), 28-42.

Jim, C. Y. y S. S. Xu. (2003). Getting out of the woods: quandries of protected area management in China. *Mountain Research and Development*, *23*, 222-226.

Johnson, L. M. (2000). A place that's good: Gitksan landscape perception and ethnoecology. *Human Ecology*, *28*(2), 301-325.

Karan, P. P. y C. Mather. (1985). Tourism and environment in the Mount Everest region. *Geographical Review*, *75*(1), 93-95.

Katz, C. (1998). Whose nature, whose culture? Private productions of space and the preservation of nature. En B. Braun y N. Castree (eds.), *Remaking reality: nature at the end of the millennium* (46-63). Routledge.

Kaus, A. (1993). Environmental perceptions and social relations in the Mapimi Biosphere Reserve. *Conservation Biology*, *7*, 398-406.

Keller, R. y M. Turek. (1998). *American Indians and national parks*. University of Arizona Press.

King, D. A. y W. P. Stewart. (1996). Ecotourism and commodification: protecting people and places. *Biodiversity and Conservation*, *5*(3), 293-305.

Kirkpatrick, J. B. (2001). Ecotourism, local and indigenous people, and the conservation of the Tasmanian Wilderness Heritage Area. *Journal of the Royal Society of New Zealand*, *31*, 819-829.

Kiss, A. G. (2004). Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? *Trends in Ecology and Evolution*, *19*(5), 232-237.

Knudsen, A. (1999). Conservation and controversy in the Karakoram: Khunjerab National Park, Pakistan. *Journal of Political Ecology*, *56*, 1-30.

Kohler, N. P. (2005). *Protected areas and landscape change in mainland Southeast Asia (Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam)* [tesis de doctorado, University of Oregon].

Kothari, A. (2004). Displacement fears. *Frontline*. http://www.frontlineonnet.com/fl2126/stories/20041231000108500.htm

Kothari, A., P. Pande, S. Singh y D. Variava. (1989). *Management of national parks and sanctuaries in India: a status report*. Indian Institute of Public Administration.

Krech III, S. (2005). Reflections on conservation, sustainability, and environmentalism in indigenous North America. *American Anthropologist*, *107*, 78-86.

Kruger, O. (2005). The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandora's box? *Biodiversity and Conservation*, *14*(3), 579-600.

Kuper, A. (2003). The return of the native. *Current Anthropology*, *44*(3), 389-402.

Lane, M. B. (2002). Buying back and caring for country: institutional arrangements and possibilities for indigenous lands management in Australia. *Society and Natural Resources*, *15*, 827-846.

Lawrence, D. (2000). *Kakadu: the making of a national park*. Melbourne University Press.

Lawson, H. M. (2003). Controlling the wilderness: the work of wilderness officers. *Society and Animals*, *11*(4), 329-351.

Leatherman, T. L. y A. Goodman. (2005). Coca-colonization of diets in the Yucatan. *Social Science & Medicine*, *61*(4), 833-846.

Lefebvre, H. (1991). *The production of space* [D. Nicholson-Smith, trad.]. Oxford Blackwell.

Li, T. (2000). Articulating indigenous identity in Indonesia: resource politics and the tribal slot. *Comparative Studies in Society and History*, *42*(1), 149-179.

Li, T. (2005). Engaging simplifications: community-based natural resource management, market processes, and state agendas in upland Southeast Asia. En J. P. Brosius, A. Tsing y C. Zerner (eds.), *Communities and conservation: histories and politics of community-based natural resource management* (427-457). AltaMira Press.

Low, S. M. (1996). Spatializing culture: the social production and social construction of public space in Costa Rica. *American Ethnologist*, *23*(4), 861-879.

MacDonald, K. (2004). Developing "nature": global ecology and the politics of conservation in Northern Pakistan. En J. Carrier (ed.), *Confronting environments: local environmental understanding in a globalising world* (71-96). Altamira Press.

MacKay, F., y E. Caruso. (2004). Indigenous lands or national parks? *Cultural Survival Quarterly*, *28*(1), 14.

Macleod, D. V. L. (2001). Parks or people? National parks and the case of Del Este, Dominican Republic. *Progress in Development Studies*, *1*(3), 221-235.

Magome, H. y C. Fabricius. (2004). Reconciling biodiversity conservation with rural development: the Holy Grail of cbnrm. En C. Fabricius, E. Koch, H. Magone y S. Turner (eds.), *Rights, resources and rural development: community-based natural resource management in Southern Africa* (93-111). Earthscan.

Mahanty, S. (2003). Insights from a cultural landscape: lessons from landscape history for the management of Rajiv Gandhi (Nagarahole) National Park. *Conservation and Society*, *1*(1), 23-45.

Maikhuri, R. K., S. Nautiyal, K. S. Rao, K. Chandrasekhar, R. Gavali y K. G. Saxena. (2000). Analysis and resolution of protected area-people conflicts in Nanda Devi Biosphere Reserve, India. *Environmental Conservation*, *27*(1), 43-53.

McCabe, J. T. (2002). Giving conservation a human face? Lessons from forty years of combining conservation and development in the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania. En D. Chatty y M. Colchester (eds.), *Conservation and mobile indigenous peoples: displacement, forced settlement and sustainable development* (61-76). Berghahn Books.

McLean, J. y S. Straede. (2003). Conservation, relocation and the paradigms of park and people management—A case study of Padampur

Villages and the Royal Chitwan National Park, Nepal. *Society & Natural Resources*, *16*, 509-526.

McNeely, J. A. y S. J. Scherr. (2003). *Ecoagriculture: strategies to feed the world and save wild biodiversity*. Island Press.

Mehta, J. N. y S. R. Kellert. (1998). Local attitudes toward community-based conservation policy and programmes in Nepal: a case study in the Makalu-Barun Conservation Area. *Environmental Conservation*, *25*(4), 320-333.

Merlin, M. D. y W. Raynor. (2005). Kava cultivation, native species conservation, and integrated watershed resource management on Pohnpei Island. *Pacific Science*, *59*(2), 241-260.

Meyer, J. (1996). *The spirit of Yellowstone: the cultural evolution of a national park*. Rowman & Littlefield.

Moore, D. S. (1998). Clear waters and muddied histories: environmental history and the politics of community in Zimbabwe's Eastern Highlands. *Journal of Southern African Studies*, *24*(2), 377-404.

Nabakov, P. y L. Lawrence. (2004). *Restoring a presence: a documentary overview of native Americans and Yellowstone National Park*. University of Oklahoma Press.

Negi, C. S. y S. Nautiyal. (2003). Indigenous peoples, biological diversity and protected area management—policy framework towards resolving conflicts. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, *10*, 169-179.

Nelson, J. y L. Hossack (eds.). (2003). *Indigenous peoples and protected areas in Africa*. Forest Peoples Programme.

Neumann, R. (1998). *Imposing wilderness: struggles over livelihood and nature preservation in Africa*. University of California Press.

Neumann, R. (2004). Moral and discursive geographies in the war for biodiversity in Africa. *Political Geography*, *23*, 813-837.

Noss, A. J., E. Cuéllar y R. L. Cuéllar. (2004). An evaluation of hunter self-monitoring in the Bolivian Chaco. *Human Ecology*, *32*(6), 685-702.

Nugent, S. (1994). *Big Mouth: the Amazon speaks*. Brown Trout Press.

Nygren, A. (1998). Environment as discourse: searching for sustainable development in Costa Rica. *Environmental Values*, *7*(2), 201-222.

Nyhus, P. (1999). *Elephants, tigers and transmigrants: conflict and conservation at Way Kambas National Park, Sumatra, Indonesia* [tesis de doctorado, University of Wisconsin].

Olwig, K. F. y K. Olwig. (1979). Underdevelopment and the development of "natural" park ideology. *Antipode*, *11*(21), 16-25.

Orlove, B. (2002). *Lines in the water: nature and culture in Lake Titicaca*. University of California Press.

Orlove, B. S. y S. B. Brush. (1996). Anthropology and the conservation of biodiversity. *Annual Review of Anthropology*, *25*, 329-352.

Overton, J. (1979). A critical examination of the establishment of national parks and tourism in underdeveloped areas: Gros Morne National Park in Newfoundland. *Antipode*, *11*(2), 34-47.

Palmer, L. M. (2001). *Kakadu as an aboriginal place: tourism and the construction of Kakadu National Park* [tesis de doctorado, Territory University].

Palmer, R., H. Timmermans y D. Fay. (2002). *From conflict to negotiation: nature-based development of the South African wild coast*. Human Sciences Research Council.

Panusittikorn, P. y T. Prato. (2001). Conservation of protected areas in Thailand: the case of Khao Yai National Park. *Protected Areas East Asia*, *18*(2), 67-76.

Pathak, N., S. Bhatt, B. Tasneem, A. Kothari y G. Borrini-Feyerabend. (2004). *Community conservation areas: a bold frontier for conservation*. cca Briefing Note 5, Nov. IUCN WCPA-CEESP Theme

on Indigenous, Local Communities, Equity, and Protected Areas (TILCEPA), con apoyo financiero de gef, cenesta.

Paudel, N. S. (2005). *Conservation and livelihoods: an exploration of the local responses to conservation interventions in Royal Chitwan National Park in Nepal* [tesis de doctorado, University of Reading].

Peluso, N. L. (1993). Coercing conservation: the politics of state resource control. *Global Environmental Change*, *3*(2), 199-218.

Peters, J. (1998). Transforming the Integrated Conservation and Development Project (icdp) approach: observations from the Ranomafana National Park Project, Madagascar. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, *11*(1), 17-47.

Peterson, N. D. (2005). *Casting a wide net: decision-making in a Mexican marine park* [tesis de doctorado, University of California].

Pfeffer, M. J., J. W. Schelhas y L. A. Day. (2001). Forest conservation, value conflict, and interest formation in a honduran National Park. *Rural Sociology*, *66*(3), 382-402.

Puntenney, P. J. (1990). Defining solutions: the Annapurna experience. *Cultural Survival Quarterly*, *14*(2), 9.

Putsche, L. (2000). A reassessment of resource depletion, market dependency, and culture change on a Shipibo reserve in the Peruvian Amazon. *Human Ecology*, *28*(1), 131-140.

Quiros, A. (2005). Whale shark ecotourism in the Philippines and Belize: evaluating conservation and community benefits. *Tropical Resources Bulletin*, *24*, 42-48.

Rae, J., G. Arab y T. Nordblom. (2002). Customs excised: arid land conservation in Syria. En D. Chatty y M. Colchester (eds.), *Conservation and mobile indigenous peoples: displacement, forced settlement and sustainable development* (212-226). Berghahn Books.

Rangarajan, M. (1996). *Fencing the forest: conservation and ecological change in India's Central Provinces 1860-1914*. Oxford University Press.

Ranger, T. (1999). *Voices from the rocks: nature, culture and history in the Matapos Hills of Zimbabwe*. James Currey.

Rao, M., A. Rabinowitz y S. T. Khaing. (2002). Status review of the protected-area system in Myanmar, with recommendations for conservation planning. *Conservation Biology*, *16*(2), 360-368.

Rasker, R. (1993). Rural development, conservation and public policy in the greater Yellowstone ecosystem. *Society & Natural Resources*, *6*, 109-126.

Roth, R. (2004). On the colonial margins and in the global hotspot: park-people conflicts in highland Thailand. *Asia Pacific Viewpoint*, *45*(1), 13-32.

Rugendyke, B. y N. T. Son. (2005). Conservation costs: nature-based tourism as development at Cuc Phuong National Park, Vietnam. *Asia Pacific Viewpoint*, *46*(2), 185-200.

Saberwal, V., M. Rangarajan y A. Kothari (eds.). (2000). *People, parks and wildlife: towards co-existence*. Orient Longman Limited.

Sanderson, S. y K. H. Redford. (2004). The defense of conservation is not an attack on the poor. *Oryx*, *38*(2), 146-147.

Santana, E. C. (1991). Nature conservation and sustainable development in Cuba. *Conservation Biology*, *5*(1), 13-17.

Sato, J. (2000). People in between: conversion and conservation of forest lands in Thailand. *Development and Change*, *31*, 155-177.

Savage, M. (1993). Ecological disturbance and nature tourism. *Geographical Review*, *83*(3), 290-300.

Schmidt-Soltau, K. (2003). Conservation-related resettlement in Central Africa: environmental and social risks. *Development and Change*, *34*, 525-551.

Schmidt-Soltau, K. (2005). The environmental risks of conservation-related displacements in Central Africa. En I. Ohta y Y. D. Gebre (eds.), *Displacement risks in Africa: refugees, resettlers and their host population* (282-311). Kyoto University Press.

Schneider, I. E. y G. W. Burnett. (2000). Protected area management in Jordan. *Environmental Management*, *25*(3), 241-246.

Schroeder, R. (1993). Shady practice: gender and the political ecology of resource stabilization in gambian Garden/Orchards. *Economic Geography*, *69*(4), 349-365.

Seeland, K. (ed.). (1997). *Nature is culture: indigenous knowledge and socio-cultural aspects of trees and forests in non-European cultures*. Intermediate Technology.

Seeland, K. (2000). National Park policy and wildlife problems in Nepal and Bhutan. *Population and Environment*, *22*(1), 43-62.

Shyamsundar, P. y R. Kramer. (1997). Biodiversity conservation—At what cost? A study of households in the vicinity of Madagascar's Mantandia National Park. *Ambio*, *26*(3), 180-184.

Sillitoe, P. (2001). Hunting for conservation in the Papua New Guinea highlands. *Ethnos*, *66*(3), 365-393.

Silori, C. S. (2001). Status and distribution of anthropogenic pressure in the buffer zone of Nanda Devi Biosphere Reserve in Western Himalaya, India. *Biodiversity and Conservation*, *10*(7), 1113-1130.

Sivaramakrishnan, K. (2003). Scientific forestry and genealogies of development in Bengal. En P. Greenough y A. Tsing (eds.), *Nature in the global south: environmental projects in South and Southeast Asia* (pp. 253-288). Durham Duke University Press.

Slattery, D. (2002). Resistance to development at Wilsons Promontory National Park (Victoria, Australia). *Society & Natural Resources*, *15*, 563-580.

Sletto, B. (2002). Producing space(s), representing landscapes: maps and resource conflicts in Trinidad. *Cultural Geographies*, *9*(4), 389-420.

Smith, N. (1990). *Uneven development: nature, capital and the production of space.* Basil Blackwell.

Smith, N. (1996). The production of nature. En G. Robertson, M. Marsh, L. Tickner, J. Bird, B. Curtis y T. Putnam (eds.), *Future/natural: nature, science, culture* (35-54). Routledge.

Sodikoff, G. (2005). *Reserve labor: a moral ecology of conservation in Madagascar* [tesis de doctorado, University of Michigan].

Spence, M. (1999). *Dispossessing the wilderness: Indian removal and the making of the National Parks*. Oxford University Press.

Stegeborn, W. (1996). Sri Lanka's forests: conservation of nature versus people. *Cultural Survival Quarterly*, *20*(1), 16-24.

Stepp, R. (2005). Documenting Garifuna traditional ecological knowledge for park co-management in Southern Belize [ponencia en reunión anual de la Society for Applied Anthropology, 65th, Santa Fe].

Stern, M. J. (2006). *Understanding local reactions to national parks: the nature and consequences of local interpretations of park policies, management, and outreach* [tesis de doctorado, Yale University].

Stevens, S. (ed.). (1997). *The legacy of Yellowstone: conservation through cultural survival. indigenous peoples and protected areas*. Island Press.

Stone, M. y G. Wall. (2004). Ecotourism and community development: case studies from Hainan, China. *Environmental Management*, *33*, 12-24.

Strathern, M. (1980). No nature, no culture: the Hagen case. En C. MacCormack y M. Strathern (eds.), *Nature, culture and gender* (174-222). Cambridge University Press.

Stronza, A. (2000). *Because it is ours: community-based ecotourism in the Peruvian Amazon* [tesis de doctorado, University of Florida].

Sullivan, S. (2000). Gender, ethnographic myths and community-based conservation in a former Namibian "homeland'". En E. Hodgson (ed.), *Rethinking pastoralism in Africa: gender, culture and the myth of the patriarchal pastoralist* (142-164). James Currey.

Sundberg, J. (1998). ngo landscapes in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. *Geographical Review*, *88*(3), 388-412.

Sundberg, J. (2003). Conservation and democratization: constituting citizenship in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. *Political Geography*, *22*(7), 715-740.

Sundberg, J. (2004). Identities in the making: conservation, gender and race in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. *Gender, Place and Culture*, *11*(1), 43-66.

Suzman, J. (2002-2003). Kalahari conundrums: relocation, resistance, and international support in the Central Kalahari Botswana. *Before Farming*, *4*(12), 1-10.

Sylvain, R. (2002). Land, water, and truth: San identity and global indigenism. *American Anthropologist*, *104*(4), 1074-1085.

Tacconi, L. y J. Bennett. (1995). Biodiversity conservation: the process of economic assessment of a protected area in Vanuatu. *Development and Change*, *26*, 89-110.

Toly, N. J. (2004). Globalization and the capitalization of nature: a political ecology of biodiversity in Mesoamerica. *Bulletin of Science, Technology & Society*, *24*(1), 47-54.

Toyne, P. y R. Johnston. (1991). Reconciliation or new dispossession? Aboriginal land rights and nature conservation. *Habitat Australia*, *19*(3), 8-10.

Trigger, D. y J. Mulcock. (2005). Forests as spiritually significant places: nature, culture, and "belonging" in Australia. *Australian Journal of Anthropology*, *16*(3), 306-320.

Tsing, A. (2003). Cultivating the wild: honey-hunting and forest management in Southeast Kalimantan. En C. Zerner (ed.), *Culture and the question of rights: forests, coasts and seas in Southeast Asia* (24-55). Duke University Press.

Van Helden, F. (1998). *Between cash and conviction: the social context of the Bismarck-Ramu Integrated Conservation and Development*

Project. NRI Monograph 33. National Research Institute / United Nations Development Programme.

Van Helden, F. (2001). *Through the thicket: disentangling the social dynamics of an integrated conservation and development project on mainland Papua New Guinea* [tesis de doctorado, Wageningen University].

Vaughan, D. (2000). Tourism and biodiversity: a convergence of interests? *International Affairs*, *76*, 283-297.

Vivanco, L. A. (2001). Spectacular quetzals, ecotourism, and environmental futures in Monte Verde, Costa Rica. *Ethnology*, *40*(2), 79-92.

Wagner, J. (2002). *Commons in transition: an analysis of social and ecological change in a coastal rainforest environment in Rural Papua New Guinea* [tesis de doctorado, McGill University].

Wagner, J. (2003). The politics of accountability: an institutional analysis of the conservation movement in Papua New Guinea. *Social Analysis*, *45*(2), 78-93.

Wallace, T. y D. N. Diamante. 2005. Keeping the people in the parks: a case study from Guatemala. *National Association of Practicing Anthropologists Bulletin*, *23*(1), 191-218.

Walley, C. (2004). *Rough waters: nature and development in an African marine park*. Princeton University Press.

Walpole, M. J., H. J. Goodwin y K. G. R. Ward. (2001). Pricing policy for tourism in protected areas: lessons from Komodo National Park, Indonesia. *Conservation Biology*, *15*(1), 218-227.

Watts, M. (1993). Development I: Power, knowledge and discursive practice. *Progress in Human Geography*, *17*(2), 257-272.

Weeks, P. (1999). Cyber-activism: world wildlife fund's campaign to save the tiger. *Culture & Agriculture*, *21*(3), 19-30.

Weiant, P. A. (2005). *A political ecology of marine protected areas (MPAs): case of Cabo Pulmo National Park, Sea of Cortez, Mexico* [tesis de doctorado, University of California].

Weinberg, A., S. Bellows y D. Ekster. (2002). Sustaining ecotourism: insights and implications from two successful case studies. *Society & Natural Resources*, *15*(4), 371-380.

Wells, M., S. Guggenheim, A. Kahn, W. Wardojo y P. Jepson. (1999). *Investing in biodiversity: a review of Indonesia's integrated conservation and development projects*. World Bank.

West, P. (2001). Environmental non-governmental organizations and the nature of ethnographic inquiry. *Social Analysis*, *45*(2), 55-77.

West, P. (2005). Translation, value, and space: theorizing an ethnographic and engaged environmental anthropology. *American Anthropologist*, *107*(4), 632-642.

West, P. (2006). *Conservation is our government now: the politics of ecology in Papua New Guinea*. Duke University Press.

West, P. y J. G. Carrier. (2004). Getting away from it all? Ecotourism and authenticity. *Current Anthropology*, *45*(4), 483-498.

Westman, W. E. (1990). Managing for biodiversity. *Bioscience*, *40*(1), 26-33.

Whitesell, E. A. (1996). Local struggles over rain-forest conservation in Alaska and Amazonia. *Geographical Review*, *86*(3), 414-436.

Wilshusen, P., S. R. Brechin, C. Fortwangler y P. C. West. (2002). Reinventing a square wheel: a critique of a resurgent protection paradigm in international biodiversity conservation. *Society & Natural Resources*, *15*, 17-40.

Wilson, A. (1992). *The culture of nature: North American landscapes from Disney to the Exxon Valdez*. Blackwell.

Winer, N. (2003). Co-management of protected areas, the oil and gas industry and indigenous empowerment—The experience of Bolivia's Kaa Iya del Gran Chaco. *Policy Matters*, *12*, 181-191.

Wolmer, W. (2003). Transboundary conservation: the politics of ecological integrity in the Great Limpopo Transfrontier Park. *Journal of Southern African Studies*, *29*, 261-278.

Zamarenda, A. (1998). *Cuyabeno Wildlife Production Reserve: indigenous people and bio-diversity conservation in Latin America*. iwgia.

Zimmerer, K. S., E. G. Ryan y M. V. Buck. (2004). Globalisation and multi-spatial trends in the coverage of protected-area conservation (1980-2000). *Ambio*, *33*(8), 520-529.

Zurick, D. N. (1992). Adventure travel and sustainable tourism in the peripheral economy of Nepal. *Annals of the Association of American Geographers*, *82*(4), 608-628.

36. Ecologismo radical estadounidense y la conservación de la naturaleza: una crítica tercermundista[1]

Ramachandra Guha

Introducción

El respetado periodista radical Kirkpatrick Sale celebró hace poco "la pasión de un movimiento nuevo y en crecimiento que se ha desencantado con el *establishment* ambiental y que en los últimos años ha emprendido un ataque serio y avasallador en su contra —hacia su estilo, sustancia, sistemas, sensibilidades y todo"—. La visión de quienes Sale llama "nuevos ecologistas" —y que en este artículo denomino como ecología profunda— es convincente. Al criticar las metas estrictamente económicas del ecologismo convencional, este nuevo movimiento procura nada menos que una revolución cultural y filosófica en la actitud humana hacia la naturaleza. A diferencia de los esfuerzos de cabildeo convencional de ambientalistas profesionales con sede en Washington, propone una defensa militante de la "Madre Tierra", una oposición inquebrantable a los ataques humanos a los espacios naturales inalterados. Con metas que abarcan desde lo político hasta lo espiritual, los partidarios de la ecología profunda abarcan un amplio espectro del movimiento ecologista en Estados Unidos. Como Sales observa correctamente, este enfoque emergente ha logrado en pocos años ganar presencia en numerosos campos: desde la filosofía académica (como en el caso de la revista *Environmental Ethics*) hasta el ecologismo popular (¡por ejemplo, el grupo Earth First!).

En este artículo desarrollo una crítica de la ecología profunda desde la perspectiva de un espectador empático. Critico a la ecología profunda no como un general (ni siquiera como un soldado raso) en la lucha continua entre los

1 Publicado originalmente en: Ramachandra Guha, 1989, "Radical American environmentalism and wilderness preservation: a Third World critique", *Environmental Ethics*, 11(1): 71-83.

fantasmas de Glifford Pinchot y John Muir sobre el control del movimiento ecologista estadounidense, sino como alguien externo a esas batallas. Admito que hablo como partidario, pero del movimiento ecologista en India, un país con una diversidad ecológica comparable a la de Estados Unidos, pero con una historia social y cultural radicalmente disímiles.

Mi abordaje de la ecología profunda es ante todo histórico y sociológico, más que de naturaleza filosófica. En específico, examino el arraigo cultural de una filosofía que suele presentarse a sí misma como universal. Elaboro dos argumentos principales: primero, que la ecología profunda es propia de Estados Unidos y que, a pesar de las similitudes superficiales del estilo retórico, las metas sociales y políticas del ecologismo radical en otros contextos culturales (por ejemplo, Alemania Occidental e India) son bastante diferentes; segundo, que las consecuencias sociales de implantar la ecología profunda en el ámbito internacional (que es lo pretendido por sus practicantes) son ciertamente muy graves.

Los principios de la ecología profunda

Aunque soy consciente de que el término *ecología profunda* fue acuñado por el filósofo noruego Arne Naess, este artículo se refiere específicamente a la variante estadounidense.[2] Los partidarios de la perspectiva de la ecología profunda en este país, aunque discuten de forma intensa entre ellos sobre sus implicaciones políticas y filosóficas, comparten algunas premisas fundamentales sobre las interacciones entre el ser humano y la naturaleza. A mi modo de ver, las características que definen a la ecología profunda son cuatro.

Primero, la ecología profunda argumenta que el movimiento ecologista debe transitar desde una perspectiva "antropocéntrica" hacia una "biocéntrica". En

2 Una de mis mayores críticas en este ensayo se relaciona con la falta de consideración de la ecología política por las desigualdades *en el seno* de la sociedad humana. En el artículo en el que acuñó el término *ecología profunda*, el mismo Naess expresa preocupación por las desigualdades entre y dentro de las naciones. Sin embargo, su preocupación por las divisiones sociales y su impacto en los patrones de utilización de los recursos y de la destrucción ecológica no es muy visible en los escritos posteriores de los adherentes a la ecología profunda. Cf. Naess (1973). Estoy agradecida con Tom Birch por esta referencia.

muchos sentidos, la aceptación de la primacía de esta distinción constituye la prueba de fuego de la ecología profunda. Los ecologistas profundos dedican un esfuerzo considerable a demostrar que el motivo dominante en la filosofía occidental ha sido el antropocentrismo —por ejemplo, la creencia de que el hombre y sus obras están en el centro del universo— y, por otro, identificar a los pensadores solitarios (Leopold, Thoreau, Muir, Aldous Huxley, Santayana, etc.) como quienes, al asignar al hombre un lugar más humilde en el orden natural, anticiparon el pensamiento de la ecología profunda. Mientras tanto, en el ámbito político, al ecologismo dominante (ecología superficial) se le reprocha centrar sus argumentos en el ser humano. La conservación de la naturaleza, según los ecologistas profundos, tiene un valor intrínseco independiente de cualquier beneficio que conservar implique para las futuras generaciones humanas. La distinción antropocéntrico-biocéntrico es aceptada por los ecologistas profundos como axiomática, estructura su discurso y gran parte de los debates actuales siguen inmersos en ella.

La segunda característica de la ecología profunda es atender a la conservación de la naturaleza inalterada y la restauración de áreas degradadas hacia una condición más prístina —en detrimento relativo (y a veces absoluto) de otros temas de la agenda ambiental—. Más tarde identificaré las raíces culturales y las consecuencias extraordinarias de esta obsesión con la idea de la naturaleza salvaje. Por el momento, me permito indicar tres fuentes distintas de donde surge. Históricamente, representa el despliegue de la dicotomía conservacionista (entiéndase como *radical*) y utilitarista (entiéndase como *reformista*) que ha plagado el ambientalismo estadounidense desde el cambio de siglo. En el plano moral, es un imperativo que deriva de una perspectiva biocéntrica, la cual señala que otras especies de plantas y animales, y la propia naturaleza, tienen un derecho intrínseco a existir. Y por último, la conservación de naturaleza prístina también se convierte en un argumento científico —esto es, el valor de la diversidad biológica para estabilizar la dinámica ecológica y preservar la variabilidad genética para las generaciones futuras—. Con base en estos argumentos, los ecologistas profundos han lanzado propuestas de política pública en verdad radicales. Por ejemplo, al influyente poeta Gary Snyder le gustaría ver una reducción de noventa por ciento en la población humana para permitir la restauración de entornos prístinos, mientras otros han argumentado enérgicamente que una gran

porción del planeta debería ser aislada de inmediato de la presencia humana (Gary Snyder, en Sale, 1986: 32; cf. Foreman, 1986).

En tercer lugar, hay una amplia invocación de tradiciones espirituales orientales como antecedente de la ecología profunda. Se sugiere que la ecología profunda fue practicada tanto por las grandes tradiciones religiosas como, a nivel más popular, por pueblos "primigenios" en ámbitos no occidentales. Esto complementa la búsqueda de un linaje auténtico en el pensamiento occidental. Por un lado, la tarea es recuperar esas voces discordantes dentro de la tradición judeocristiana; por otro, sugerir que las tradiciones religiosas en otras culturas son, al contrario, de forma dominante, cuando no de forma exclusiva, "biocéntricas" en su orientación. Este acoplamiento de la sabiduría oriental (antigua) y ecológica (moderna) contribuye en apariencia a consolidar la afirmación de que la ecología profunda es una filosofía de alcance universal.

En cuarto lugar, los ecologistas profundos, sin importar sus diferencias internas, comparten la creencia de que son "la vanguardia" del movimiento ecologista. La divergencia en las distinciones superficial/profundo y antropocéntrico/biocéntrico muestra que ellos se consideran la vanguardia espiritual, filosófica y política del ecologismo estadounidense y mundial.

Hacia una crítica

Aunque analizo cada uno de estos principios por separado, es importante reconocer, como les gusta hacer a los ecologistas profundos cuando se refieren a la naturaleza, la interconexión y la unidad de estos principios individuales. (1) Dado que ha empezado a frenar la arrogancia y la soberbia ecológica del ser humano, la transición de un enfoque antropocéntrico (centrado en los humanos) a uno biocéntrico (los humanos son solo un elemento del ecosistema) tanto en las tradiciones religiosas como científicas es algo que debe ser bienvenido (cf. Worster, 1977). Lo inaceptable son las conclusiones radicales elaboradas por la ecología profunda, en particular, que la intervención en la naturaleza debe guiarse fundamentalmente por la necesidad de preservar la integridad biológica y no por las necesidades humanas. Los ecologistas profundos consideran esto último como antropocéntrico, y lo anterior, biocéntrico. Sin embargo, la dico-

tomía es poco útil para entender las dinámicas de la degradación ambiental. Los dos problemas ecológicos fundamentales que el mundo enfrenta son (i) el sobreconsumo del mundo industrializado y de las elites urbanas en el tercer mundo y (ii) la creciente militarización tanto a corto (por ejemplo, continuas guerras regionales) como a largo plazo (por ejemplo, la carrera armamentista y el prospecto del aniquilamiento nuclear). Ninguno de estos problemas tiene un vínculo tangible con la distinción antropocéntrico-biocéntrico. De hecho, los protagonistas de estos procesos apenas comprenderían esta dicotomía filosófica. Las causas inmediatas del carácter derrochador de la sociedad industrial y de la militarización son mucho más triviales: a escala global, la dialéctica de las estructuras económicas y políticas y en el nivel micro, el estilo de vida de los individuos. Estas causas no pueden reducirse, sea cual sea el nivel de análisis, a una actitud antropocéntrica más profunda hacia la naturaleza, al contrario, al constituir una amenaza concreta para la supervivencia humana, ¡la degradación ecológica que provocan ni siquiera sirve a los mejores intereses de los seres humanos! Si la identificación que hago de los principales peligros para la integridad del mundo natural es correcta, invocar la amenaza del antropocentrismo es en el mejor de los casos irrelevante y, en el peor, una ofuscación peligrosa.

(2) Si la dicotomía anterior es irrelevante, el énfasis en la naturaleza pristina es perjudicial cuando se aplica al tercer mundo. Si en Estados Unidos la división conservacionista/utilitarista se percibe como un reflejo del conflicto entre las "personas" y los "intereses", en países como India la situación es casi la opuesta. Dado que India es, desde hace tiempo, un país densamente poblado donde las poblaciones agrícolas tienen una relación de delicado equilibrio con la naturaleza, el establecimiento de áreas naturales ha resultado en la transferencia directa de recursos de los pobres hacia los ricos. Así, el Project Tiger, una red de parques elogiado por la comunidad conservacionista internacional como un éxito rotundo, opone claramente los intereses del tigre a los de los campesinos pobres que viven en la reserva y sus alrededores. La declaración de reservas para el tigre fue posible solo gracias al desalojo físico de las aldeas y de sus habitantes; su gestión requiere de la continua exclusión de los campesinos y su ganado. El impulso inicial para establecer parques para el tigre y otros grandes mamíferos como los rinocerontes y el elefante vino de dos grupos sociales, el primero, una clase de excazadores convertidos en

conservacionistas pertenecientes en su mayoría a la elite feudal india en decadencia, y el segundo, representantes de agencias internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN), que buscaban trasladar el sistema estadounidense de parques nacionales a tierras indias. En ningún caso se han considerado las necesidades de la población local y, como sucede en muchas partes de África, las reservas establecidas son gestionadas sobre todo para el beneficio de turistas ricos. Hasta hace muy poco, el Estado y la elite conservacionista identificaban la conservación de las zonas silvestres con el ecologismo, por lo que los problemas ambientales afectan de modo más directo a la vida de los pobres; por ejemplo, la escasez de gasolina, forraje y agua, la erosión del suelo, la contaminación del aire y del agua no han sido abordados de manera adecuada (cf. Centro por la Ciencia y el Medio Ambiente, 1982; Sukumar, 1985. Sobre África, Kjekshus (1977).

La ecología profunda brinda, quizá sin darse cuenta, una justificación para continuar con prácticas de conservación limitadas e inequitativas bajo una apariencia radical recién adquirida. La élite conservacionista internacional utiliza cada vez con mayor frecuencia los argumentos filosóficos, morales y científicos empleados por la ecología profunda para impulsar su cruzada por la naturaleza prístina. Un ejemplo llamativo, pero de ningún modo atípico, es la reciente petición de un prominente biólogo estadounidense para que él y sus colegas científicos tomen posesión de grandes extensiones del planeta. Daniel Janzen, cuando escribe en el prestigioso foro científico *Annual Review of Ecology and Systematics*, argumenta que únicamente los biólogos tienen la capacidad para decidir cómo debe usarse el entorno tropical. Como los "representantes del mundo natural", los biólogos están "a cargo del futuro de la ecología tropical", y solo ellos tienen los conocimientos y los mandatos para "determinar si el agropaisaje tropical debe ser poblado solo por humanos, sus mutualistas, comensales y parásitos, o si también debe contener algunas islas de la gran naturaleza —la naturaleza que engendró a los humanos y que ha sido vencida por ellos—". Janzen exhorta a sus colegas a exponer sus reclamos territoriales sobre el mundo tropical con mayor contundencia, mientras advierte que la existencia misma de estas zonas está en peligro: "Si los biólogos quieren un trópico en el cual *biologizar*, tendrán que comprarlo con cuidado,

energía, esfuerzo, estrategia, táctica, tiempo y dinero" (Janzen, 1986: 305-306, subrayado propio).

Este manifiesto francamente imperialista señala los múltiples peligros de la preocupación por conservar la naturaleza que caracteriza a la ecología profunda. Como he sugerido, esto agrava de forma seria la negligencia del movimiento estadounidense frente a los problemas ambientales más apremiantes en el tercer mundo. Pero quizá lo más importante, y más insidioso, es que también fortalece los anhelos imperialistas de los biólogos occidentales y sus patrocinadores financieros, como la wwf y la iucn. La difusión a gran escala de un movimiento culturalmente arraigado en la historia de la conservación estadounidense sólo puede resultar en el desarraigo social de poblaciones humanas en otras partes del mundo.

(3) Entiendo la alusión persistente a las filosofías orientales como antecedentes temporales pero convergentes en su estructura con la ecología profunda. Tradiciones religiosas complejas e internamente diferenciadas —hinduismo, budismo y taoísmo— son agrupadas por contener una visión de la naturaleza considerada biocéntrica en esencia. Filósofos como el taoísta Lao Tzu son identificados como los predecesores de la ecología profunda. Incluso a un pensador profundamente político, pragmático e influido por el cristianismo como Ghandi se le ha otorgado un lugar totalmente inmerecido en el panteón de la ecología profunda. Así, el maestro zen Robert Aitken Roshi hace la extraña afirmación de que el pensamiento de Ghandi no estaba centrado en los seres humanos y que él practicaba una forma embrionaria de ecología profunda "tradicionalmente oriental que se observa con diferentes énfasis en el hinduismo, el taoísmo y en el budismo Theravada y Mahayana" (Aitken, 1985. cf. Iyer, 1986.). Alejándose del ámbito de la alta filosofía y de las escrituras religiosas, los ecologistas profundos llegan a afirmar que, en cuanto a sus prácticas material y espiritual, los pueblos "primigenios" se subordinaban a la integridad del universo biótico que habitaban.

Ya he indicado que esta apropiación de las tradiciones orientales está determinada tanto por la necesidad de construir un linaje auténtico como por el deseo de presentar a la ecología profunda como una filosofía universal. De hecho, en la importante y quijotesca biografía de John Muir, Michel Cohen

llega a sugerir que Muir fue el "taoísta del Occidente [estadounidense]" (Cohen, 1984: 120). Esta lectura de las tradiciones orientales es selectiva y no se preocupa por diferenciar entre tradiciones religiosas y culturales variadas (y cambiantes), lo cual violenta de forma considerable el registro histórico. A lo largo de la historia documentada, la actividad humana característica en el "Este" ha sido una manipulación finamente sintonizada pero no por ello menos consciente y dinámica de la naturaleza. Aunque algunos místicos como Lao Tzu en efecto reflexionaron sobre la esencia espiritual de las relaciones humanas con la naturaleza, debe reconocerse que tales ascetas y sus reflexiones fueron apoyadas por una sociedad de agricultores cuya relación con la naturaleza era mucho más *activa*. Muchas comunidades agrícolas ciertamente poseen un conocimiento sofisticado sobre el medio natural que podría equipararse (y en ocasiones superar) al conocimiento "científico" codificado; sin embargo, la producción del conocimiento ecológico tradicional (tanto en términos materiales como espirituales) difícilmente puede decirse que descansa sobre una afinidad mística de la ecología profunda con la naturaleza. Este tipo de conocimiento tampoco es infalible; como lo sugiere de forma contundente el registro arqueológico, el hombre occidental moderno no tiene el monopolio de los desastres ecológicos.

En un brillante artículo, el historiador de Chicago Ronald Inden señala que esta visión romántica y esencialmente positiva de Oriente es la imagen invertida de la perspectiva científica y en esencia peyorativa que sostienen los académicos occidentales sobre el Oriente. En ambos casos, el Oriente constituye el otro, un cuerpo por completo distinto y ajeno a Occidente; definido por una "esencia" espiritual única e irracional, aun cuando esta esencia es valorada de forma bastante distinta por cada escuela. El hombre oriental muestra una dependencia espiritual con la naturaleza —por un lado, esto es sintomático de su yo precientífico y atrasado; por otro, de su sabiduría ecológica y de una profunda conciencia ecológica—. Ambas perspectivas son monolíticas, simplistas y tienen el efecto característico —intencional en un caso; quizá no deliberado, en otro— de negar agencia y razonamiento al Oriente y convertirlo en la órbita privilegiada de los pensadores occidentales.

Las dos perspectivas en apariencia opuestas tienen, entonces, una estructura discursiva subyacente común donde el Oriente solo sirve como

vehículo para las proyecciones occidentales. Diversas imágenes de Oriente son la materia prima para batallas políticas y culturales que se desarrollan en Occidente; estas nos dicen mucho más sobre el comentarista occidental y sus deseos que sobre el "Oriente". Los comentarios de Inden se aplican no solo para los estudios occidentales sobre la India, sino también para las construcciones orientalistas de China y Japón.

Aunque estas dos visiones parecen mantenerse en fuerte oposición, a menudo se combinan. Ambas tienen un interés similar en sostener la otredad de la India. Los portadores de la perspectiva dominante, en el pasado claramente ejemplificada en el discurso administrativo imperial (y hoy en día quizá en las "economías de desarrollo"), colocaría a una India tradicional, plagada de supersticiones, en una posición de tutela perpetua frente a un Occidente moderno y racional. Los adherentes a la perspectiva romántica, mejor ejemplificada académicamente en los discursos del liberalismo cristiano y la psicología analítica, conceden el ámbito de lo público e impersonal a los positivistas. Los románticos insisten en que la India encarna un ámbito privado de la imaginación y lo religioso del que carece el hombre occidental moderno, pero que necesita, y que su ayuda no procede de los Gobiernos ni de las grandes empresas, sino de una plétora de fundaciones religiosas e institutos de autoayuda, así como de aliados en la industria de la conciencia, por no mencionar la importante industria del turismo. Por tanto, al igual que los positivistas, pero por la razón contraria, los románticos tienen un gran interés en que se perpetúe la visión orientalista de la India como "espiritual", "misteriosa" y "exótica" (Inden, 1986: 442).[3]

(4) Por último, ¿qué tan radicales son los ecologistas profundos? A pesar de su autopercepción y retórica estridente (donde la etiqueta de "ecología superficial"

3 Inden toma inspiración de la tajante y polémica obra de Said (1980). Sin embargo, es importante notar que hay una diferencia notable entre las percepciones occidentales de las culturas del Medio Oriente y del Lejano Oriente, respectivamente. Debido quizá a la larga historia de conflicto cristiano con el islam, las culturas del Medio Oriente (como lo documenta Said) se presentan en términos peyorativos de manera consistente. La yuxtaposición de actitudes hostiles con actitudes de adoración de las que habla Inden solo aplican para las actitudes occidentales hacia las sociedades budistas e hinduistas.

tiene un oprobio similar al que los marxistas-leninistas reservan a los socialdemócratas), incluso en el contexto estadounidense su radicalismo es limitado y se manifiesta de forma muy diferente en otros lugares. A mi modo de ver, la mejor manera de entender la ecología profunda es como una tendencia radical dentro del movimiento para la preservación de la naturaleza. Aunque impulsa argumentos filosóficos en lugar de estéticos y alienta la militancia política en vez de la negociación, su énfasis en lo práctico —esto es, la conservación de la naturaleza prístina— es virtualmente idéntico. Para el movimiento dominante, la función de la naturaleza es la de brindar un antídoto temporal a la civilización moderna. Como una institución especial dentro de la sociedad industrializada, el parque nacional "ofrece una oportunidad de respiro, contraste, contemplación y afirmación a quienes viven la mayor parte de su vida en el mundo laboral" (Sax, 1980: 42; cf. Schmitt, 1969; Runte, 1979). De hecho, el rápido aumento de visitas a los parques nacionales en los Estados Unidos de la posguerra es una consecuencia directa de la expansión económica. El historiador Samuel Hays señala que el surgimiento de un interés popular por los sitios naturales no fue "un retroceso hacia lo primitivo, sino una parte integral del estándar de vida moderno en el que las personas buscaron incorporar nuevas 'amenidades' y deseos y metas 'estéticas' a su preocupación previa por las necesidades y la conveniencia" (Hays, 1982: 21. cf. Hays, 1987).

Aquí, el disfrute de la naturaleza es una parte integral de la sociedad de consumo. El automóvil privado (y el estilo de vida que ha generado) es en muchos sentidos el mayor villano ecológico, y la naturaleza intocada el prototipo de la armonía ecológica; sin embargo, para muchos estadounidenses es perfectamente coherente conducir kilómetros para vacacionar en un parque nacional. Poseen un continente vasto, hermoso y escasamente poblado, y también pueden valerse de los recursos naturales de grandes áreas del mundo dado su dominio económico y político. Por ende, Estados Unidos puede disfrutar al mismo tiempo de los beneficios materiales de una economía en expansión y de los beneficios estéticos de una naturaleza prístina. Los dos polos "naturaleza" y "civilización" coexisten de forma mutua en un todo internamente coherente y filósofos de ambos polos gozan de un lugar prominente en esta cultura. Tan paradójico como pudiera parecer, no es ningún accidente que tanto la tecnología de *Star Wars* como

la ecología profunda encuentran su máxima expresión en ese espacio líder de la civilización occidental que es California.

La ecología profunda corre paralela a la sociedad de consumo sin cuestionar seriamente su base ecológica y sociopolítica. En su celebración de la naturaleza estadounidense, también despliega una convergencia incómoda con el nacionalismo imperante en el movimiento conservacionista en Estados Unidos. Para voceros como el historiador Roderick Nash, el sistema de parques nacionales es la contribución cultural distintiva de Estados Unidos al mundo, reflejo no solo de su madurez económica, sino también filosófica y ecológica. En lo que Walter Lippman llamó el siglo estadounidense, la "invención americana de los parques nacionales" debe exportarse a todo el mundo. Mostrando un determinismo económico que haría estremecerse incluso a un marxista, Nash cree que la conservación del ambiente es un fenómeno de "estómago lleno" que se limita a los ricos, urbanos y sofisticados. No obstante, espera que "las naciones menos desarrolladas acaben evolucionando económica e intelectualmente hasta un punto donde la conservación de la naturaleza sea algo más que un negocio" (Nash, 1982)[4].

El error que comete Nash (y que en cierto sentido alienta la ecología profunda) es equiparar la protección del ambiente con la protección de la naturaleza prístina. Esta es una noción típicamente estadounidense, nacida de una historia social y ambiental única. Las preocupaciones arquetípicas de los ecologistas radicales en otros contextos culturales son de hecho bastante distintas. Los German Greens, por ejemplo, han elaborado una crítica devastadora de la sociedad industrial que gira en torno a la aceptación de límites ambientales al crecimiento. Al señalar los estrechos vínculos entre la industrialización, la militarización y la conquista, los Greens alegan que el crecimiento económico en Occidente ha dependido históricamente de la explotación económica y ecológica del tercer mundo. Rudolf Bahro es franco en particular:

> Aquí [en Occidente] la clase obrera es la clase baja más rica del mundo. Y si observo el problema desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto, no solo desde Europa, entonces debo decir que la clase obrera metropolitana

4 N. de T.: Se advierte al lector que para esta cita, no se indica el número de página. Es una supresión de origen.

> es la clase más explotada de la historia […] Lo que hizo que la pobreza fuera tolerable en la Europa del siglo XVIII o XIX fue la posibilidad de escapar mediante la explotación de la periferia. Pero esto ya no es viable y la permanencia de la industrialización en el tercer mundo significa pobreza para generaciones enteras y hambre para millones (Bahro, 1984)[5].

En este caso, las causas de los problemas ecológicos mundiales se encuentran en la cantidad desproporcionada de recursos que consumen los países industrializados en su conjunto y la élite urbana del tercer mundo. Dado que es imposible reproducir un monocultivo industrial en todo el mundo, el movimiento ecologista de Occidente debe empezar por corregir su propio actuar. Los Greens abogan por la creación de una economía de "no crecimiento", que puede alcanzarse mediante la reducción de los niveles actuales de consumo (y claramente insostenibles).[6] Este cambio radical en los patrones de consumo y producción requiere la creación de estructuras económicas y políticas alternativas —de menor escala y más proclives a la participación social—, pero asimismo se basa en un cambio de valores culturales. El carácter expansionista del hombre occidental moderno deberá ceder a una ética de la renuncia y la autolimitación, donde los valores espirituales y colectivos desempeñen un papel cada vez más importante el mantenimiento de la vida social. Sin embargo, esta revolución de los valores culturales tiene como punto de partida una comprensión de los procesos ambientales muy distinta a la de la ecología profunda.

Muchos elementos del programa Green tienen una fuerte resonancia en países como la India, donde la historia del colonialismo occidental y el desarrollo industrial han beneficiado tan solo a una diminuta élite con enormes costos sociales y ambientales. Las batallas ecológicas que se libran actualmente en

---

5 N. de T.: Se advierte al lector que para esta cita, no se indica el número de página. Es una supresión de origen.

6 De vez en cuando algún académico estadounidense llega a criticar estos desequilibrios en los patrones de consumo. En la década de los cincuenta, William Vogt lanzó la acusación de que Estados Unidos, con una dieciseisava parte de la población mundial, utilizaba un tercio de los recursos globales (Vogt, en Murphy, 1977: 29). Zero Population Growth, más recientemente, ha calculado que cada estadounidense consume treinta y nueve veces los recursos que consume un indio. Cf. *Christian Science Monitor*, 2(1987).

la India tienen como epicentro el conflicto por la naturaleza entre un amplio sector de subsistencia rural en su mayor parte y el sector comercial-industrial, mucho más poderoso. Quizá la más célebre de estas batallas es la del movimiento chipko "Abraza al árbol", un movimiento campesino que se opone a la deforestación de las laderas del Himalaya. Chipko es tan solo uno de varios movimientos que han cuestionado severamente la demanda no sostenible que los centros urbanos y la industria ejercen sobre el suelo y la vegetación. Estos incluyen la oposición a grandes presas por campesinos desplazados, el conflicto entre pequeños pescadores artesanales y la pesca de arrastre a gran escala para exportación, los movimientos nacionales contra las operaciones forestales comerciales y la oposición a la contaminación industrial en comunidades agrícolas y pesqueras río abajo.[7]

Dos rasgos distinguen a estos movimientos ambientales de sus contrapartes occidentales. En primer lugar, para los sectores sociales más críticamente afectados por la degradación —campesinos pobres y sin tierras, mujeres y grupos indígenas— esta es una cuestión de mera sobrevivencia, no de mejorar la calidad de vida. En segundo lugar, y en consecuencia, las soluciones ambientales que articulan implican en gran medida cuestiones de equidad, así como de redistribución económica y política. Para subrayar estas diferencias, un líder ecologista de India señala que "la protección del ambiente por sí misma es lo que menos inquieta a estos grupos. Su principal preocupación es el uso del ambiente y quién debe beneficiarse de él" (Agarwal, 1986: 167). Intentan arrancar el control sobre la naturaleza del Estado y del sector industrial, y ponerlo en manos de las comunidades rurales que habitan el entorno pero que cada vez tienen menos acceso a él. Estas comunidades tienen necesidades mucho más básicas, sus demandas sobre el ambiente son mucho menos intensas y disponen de instituciones sociales, cooperativas y conocimiento ecológico local para la gestión de los "bienes comunales" —bosques, pastizales y aguas— de manera sostenible. Si la expansión colonial y capitalista ha acentuado tanto las desigualdades, como precipitado la reducción de la sabiduría ecológica, una ecología alternativa debe basarse también en una sociedad y un sistema político distintos.

---

7 Para una excelente revisión del caso, véase Agarwal y Narain, 1985; Guha, 1990.

Este breve repaso del ambientalismo alemán e indio tiene algunas implicaciones importantes para la ecología profunda. Tanto la tradición india como la alemana permiten una mayor integración de las preocupaciones ecológicas con la subsistencia y el trabajo. También hacen mayor hincapié en la equidad y la justicia social (tanto dentro de cada país como a escala mundial), ya que, sin transformación social, la conservación del ambiente tiene muy pocas posibilidades de éxito. Por último, y quizá más significativo, han escapado de la preocupación por la conservación de la naturaleza tan característica de la historia cultural y ambiental estadounidense.[8]

Una homilía

En 1958, el economista J. K. Galbraith se refirió al sobreconsumo como la cuestión no planteada del movimiento conservacionista estadounidense. Existe una selectividad marcada, escribió, "en el enfoque conservacionista sobre el consumo de materias primas. Si nos preocupa nuestro gran apetito por materias primas, es lógico tratar de aumentar la oferta, disminuir los residuos, aprovechar mejor las existencias disponibles y desarrollar sustitutos. Pero ¿qué ocurre con el apetito en sí mismo? Sin duda, este es el origen último del problema. Si sigue su curso expansivo, ¿no habrá que limitarlo algún día? Sin embargo, en la bibliografía sobre recursos naturales, esta es la pregunta prohibida. Sobre ella pesa un silencio casi total" (Galbraith, 1958: 91-92).

La economía y la sociedad de consumo se han expandido de forma enorme en tres décadas desde que Galbraith escribió las palabras anteriores, pero su crítica es casi igualmente válida en la actualidad. Dije "casi", porque hay algunas señales esperanzadoras. Dentro del movimiento ecologista, varios grupos dispersos están trabajando para desarrollar tecnologías ecológicamente benignas e impulsar estilos de vida menos derrochadores. Además, fuera de los límites autodefinidos

8 Una rama del ecologismo estadounidense, el movimiento biorregional, al subrayar una mayor integración con la bio región que habitan las personas, sí reta de forma indirecta al consumismo. Sin embargo, el biorregionalismo hasta ahora casi no ha cuestionado temas de equidad y justicia social (internacional, intra nacional e intergeneracional), algo que yo sostengo como un pilar central del ecologismo radical. Asimismo, su énfasis en la *experiencia* (individual) como clave en el involucramiento con la naturaleza también está de cierta forma en contradicción con la integración de la naturaleza con el sustento y el trabajo que abordo en este ensayo. Cf. Sale, 1985.

del ecologismo estadounidense, la oposición a la economía de guerra permanente está siendo impulsada por un movimiento pacifista que tiene una distinguida historia y credenciales morales y políticas impecables.

Son precisamente estos componentes (en mi opinión, los más esperanzadores) del escenario social estadounidense los que hacen falta en la ecología profunda. En un libro que captó gran atención, Bill Devall y George Sessions no hacen mención alguna sobre la militarización ni los movimientos por la paz, pero se burlan de los activistas cuyo enfoque práctico es desarrollar estilos de vida ecológicamente responsables (por ejemplo, Wendell Berry) por "carecer de una conciencia ecológica profunda" (Devall y Sessions, 1985: 122).[9] Una ecología de verdad radical en Estados Unidos debería trabajar hacia una síntesis de la tecnología apropiada, el estilo de vida alternativo y los movimientos pacifistas.[10] Al hacer de la distinción antropocéntrico-biocéntrico (en gran medida falsa) un elemento central de debate, los ecologistas profundos pueden haberse apropiado de la superioridad moral pero, al mismo tiempo, están perjudicando de manera grave el ambientalismo estadounidense y mundial.[11]

9 Para la evaluación de Wendell Berry de la ecología profunda, cf. Berry, W. (1987).

10 Cf. la interesante aportación reciente de uno de los voceros más influyentes de tecnologías apropiadas: Commoner, 1987. Si bien Commoner hace una petición enérgica para la convergencia del movimiento ecologista (que a su modo de ver es primariamente la oposición a la contaminación del agua y del aire y a las instituciones que la generan) y el movimiento de paz, es significativo que no menciona los patrones de consumo, con lo cual da a entender que no existen los "límites al crecimiento".

11 En este sentido, mi crítica de la ecología profunda, aunque es de alguien externo, podría facilitar la reiteración de aquellos elementos de la tradición ecologista estadounidense que generan profundas simpatías en otras partes del mundo. Una perspectiva global también podría llevar a una revaluación crítica de figuras como Aldo Leopold y John Muir, los dos santos patronos de la ecología profunda. Como ha señalado Donald Worster, el mensaje de Muir (y, yo diría, de Leopold también) solo tiene sentido en un contexto estadounidense; tiene muy poco que decirles a otras culturas. Cf. Fox, 1983.

Referencias

Agarwal, A. (1986). Human-nature interactions in a third world country. *The Environmentalist*, *6*(3), 165-173.

Agarwal, A. y S. Narain (eds.). *India: the state of the environment (1984-85)*: *a citizens report*. Centre for Science and Environment.

Aitken Roshi, R. (1985). Gandhi, Dogen, and deep ecology. En B. Devall y G. Sessions, *Deep ecology: living as if nature mattered* (Apéndice C). Salt Peregrine Smith Books.

Bahro, R. (1984). *From red to green*. Verso Books.

Berry, W. (1987). Applications: preserving wildness. *Wilderness*, *50*(176), 39-40, 50-54.

Centro por la Ciencia y el Medio Ambiente. (1982). *India: the state of the environment (1982)*: *a citizens report*.

Cohen, M. (1984). *The pathless way*. University of Wisconsin Press.

Commoner, B. (1987, 15 de junio). A reporter at large: The environment. *The New Yorker*, *63*(17), 46-71.

Devall, B. y G. Sessions. (1985). *Deep ecology: living as if nature mattered*. Salt Peregrine Smith Books.

Foreman, D. (1986). A modest proposal for a wilderness system."*Whole Earth Review*, *53*, 42-45.

Fox, S. (1983). John Muir and his legacy [Reseña del libro *John Muir and his legacy: the American conservation movement*, por S. Fox]. *Environmental Ethics*, *5*(3), 277-281.

Galbraith, J. K. (1958). How much should a country consume? En H. Jarrett (ed.). *Perspectives on conservation* (pp. 89-99). Johns Hopkins Press.

Guha, R. (1990). *The unquiet woods: ecological change and peasant resistance in the Indian Himalaya*. University of California Press.

Hays, S. (1982). From conservation to environment: environmental politics in the United States since World War Two. *Environmental Review*, *6*, 14-41.

Hays, S. (1987). *Beauty, health and permanence: environmental politics in the United States*. Cambridge University Press.

Inden, R. (1986). Orientalist constructions of India. *Modern Asian Studies*, *20*, 401-446.

Iyer, R. (1986). *The moral and political writings of Mahatma Gandhi*. Clarendon Press.

Janzen, D. (1986). The future of tropical ecology. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 17, 305-306.

Kjekshus, H. (1977). *Ecology control and economic development in East African history*. University of California Press.

Murphy, E. F. (1977). *Nature, bureaucracy and the rule of property*. North-Holland.

Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement: a summary. *Inquiry*, *16*, 96.

Nash, R. (1982). *Wilderness and the American mind* (tercera edición). Yale University Press.

Runte, A. (1979). *National parks: the American experience*. University of Nebraska Press.

Said, E. (1980). *Orientalism*. Basic Books.

Sale, K. (1985). *Dwellers in the land: the bioregional vision*. Sierra Club Books.

Sale, K. (1986). The forest for the trees: can today's environmentalists tell the difference. *Mother Jones*, *11*(8), 26.

Sax, J. (1980). *Mountains without handrails: reflections on the national parks*. University of Michigan Press.

Schmitt, P. (1969). *Back to nature: the Arcadian myth in urban America*. Oxford University Press.

Sukumar, R. (1985). Elephant-man conflict in Karnataka. En C. Saldanha (ed.), *The state of Karnataka's environment*. Centre for Taxonomic Studies.

Worster, D. (1977). *Nature's economy: the roots of ecology*. Sierra Club Books.

37. Hacia una crítica sintética de la conservación neoliberal de la biodiversidad*[1]

Bram Büscher, Sian Sullivan, Katja Neves, James Igoe y Dan Brockington

Introducción

El objetivo de este artículo es ofrecer una crítica sintética de la conservación neoliberal de la biodiversidad. Consideramos que esto es necesario por dos motivos. En primer lugar, la mayor parte de los trabajos sobre la confluencia del neoliberalismo, el capitalismo y las naturalezas no humanas se han centrado en las *naturalezas* neoliberales (Castree, 2008a; 2008b; Heynen y Robbins, 2005; McCarthy y Prudham, 2004), las *ecologías* neoliberales (Castree, 2007) y los *ambientes* neoliberales (Henyen *et al*., 2007), pero no en la *conservación* neoliberal. Esta literatura explora cómo el ámbito de lo natural es transformado por y para la acumulación del capital. McCarthy y Prudham (2004: 279), por ejemplo, se refieren a la naturaleza neoliberal como "la política de transformar y gobernar la naturaleza bajo el neoliberalismo"; Henyen y Robbins (2005: 6) mencionan el incremento de la "continua mercantilización de los recursos naturales"; mientras que Henyen *et al.* (2007: 3) hablan de los ambientes neoliberales como "formas en las que se intenta 'extender' y 'profundizar' [...] el alcance de la circulación de mercancías en función de la reestructuración de la gobernanza ambiental y del fortalecimiento de la comodificación de la naturaleza y viceversa". Nuestra síntesis, en cambio, se centra en la conservación neoliberal

1 Publicado originalmente en: Bram Büscher, Sian Sullivan, Katja Neves, James Igoe y Dan Brockington, 2011, "Towards a synthesized critique of neoliberal biodiversity conservation" (*Capitalism Nature Socialism*, 23(2): 4-30.

*N. de T.: Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original de los autores. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

como una amalgama de *ideologías y técnicas* basadas en la premisa de que la naturaleza solo puede ser "salvada" por medio de su sometimiento al capital y de su subsecuente revaloración en términos capitalistas, lo que McAfee ha descrito acertadamente como "vender a la naturaleza para salvarla". Dicho de otra forma, la conservación neoliberal traslada el análisis sobre cómo se utiliza la naturaleza en y mediante la expansión del capitalismo, hacia cómo se conserva la naturaleza en y por medio de la expansión del capitalismo.

En segundo lugar, una serie de publicaciones recientes estudian la tendencia neoliberal de la conservación, pero sus conclusiones permanecen inconexas. Nos referimos, entre otros, a Sullivan (2005; 2006; 2009), Igoe y Brockington (2007), Dressler y Büscher (2008), Büscher (2008; 2010a; 2010b), Brockington *et al*. (2008), Brockington (2009), Igoe (2010), Fletcher (2010), Brockington y Duffy (2010), Roth y Dressler (2012) y Arsel y Büscher (2012),[2] así como a varios trabajos sobre biología de la conservación que se ocupan cabalmente de la conservación "neoliberal", aunque sin llamarla de este modo.[3] Esta efervescencia en la producción académica recuerda la crítica que hace Castree (2008a) la comprensión y los escritos de los geógrafos sobre el neoliberalismo y la naturaleza: los profesionales y académicos están "usando los mismos términos —'neoliberalismo' y 'neoliberalización'— para referirse y evaluar fenómenos y situaciones que no necesariamente son parecidas o comparables". James Ferguson (2010) afirma además que los "usos del neoliberalismo" en la "academia progresista" pueden producir algo así como una reacción instintiva contra cualquier iniciativa que contenga elementos neoliberales, aun cuando la iniciativa pueda producir resultados progresistas en algunos aspectos y a ciertas escalas. Debido a estas razones, es importante resumir los amplios hallazgos de esta literatura reciente, en especial porque los trabajos actuales sobre la conservación neoliberal y las naturalezas neoliberales

2 Y los artículos de los números especiales de *Antipode*, *Geoforum* y *Development and Change* introducidos por los últimos tres artículos.

3 Cf. Vira y Adams (2008), Walker *et al*. (2009), Chan *et al*. (2007), entre otros. Peterson *et al*. (2009) es una excepción donde se subraya la influencia estructuradora del neoliberalismo en particular.

permanecen inexplicablemente desvinculados.[4] En el siguiente análisis, intentamos brindar una imagen clara de lo que significa la conservación neoliberal, su relación con la literatura sobre conservación neoliberal, ecología y ambiente, y por qué esto es relevante para quienes se interesan en la conservación de la biodiversidad y los enredos humanos/naturaleza.

Dados los diversos e híbridos "usos del neoliberalismo" (Ferguson, 2010; Larner, 2000) y en aras de simplificar nuestra misión, utilizamos el término *neoliberalismo* de una forma específica: como una *ideología política* que busca someter los asuntos políticos, sociales y ecológicos a las dinámicas capitalistas de mercado (Büscher, 2008; Foucault, 2008). No obstante, no consideramos que el neoliberalismo funcione como un código universal subyacente a las prácticas. Seguimos a Foucault al entender que la ideología neoliberal va acompañada y se manifiesta mediante distintas gubernamentalidades (técnicas y tecnologías de gestión de las personas y la naturaleza) y prácticas encarnadas en los ámbitos social, material y epistemológico. Combinados, operan el biopoder para construir y regular la vida y las vidas de manera significativa. (Nally, 2011). Comenzamos afirmando que existe una confusión de lo que por lo general (y de forma simplista) se denomina economía bajo los supuestos ideológicos del neoliberalismo, en los discursos de conservación. Al profundizar en esta confusión, en sus vínculos con procesos capitalistas más amplios y en sus efectos en los ecosistemas, argumentamos que resulta más fácil distinguir los distintos efectos negativos de los modelos neoliberales de conservación de la biodiversidad donde todos ganan (*win-win*), y por tanto elaborar una crítica consensuada en torno a tres puntos principales: 1) el impulso de las contradicciones; 2) la apropiación y la falsificación y 3) el disciplinamiento del disenso. Inspirada en el reciente "manifiesto composicionista" de Bruno Latour, nuestra conclusión subraya algunas ideas para avanzar más allá de la crítica. Sin embargo, en primer

4 La escritura existente sobre naturalezas, ecologías y ambientes neoliberales parece ignorar la mayoría de la producción académica sobre conservación neoliberal. Desde luego, la relativa novedad de la última podría explicar su escasez en colecciones claves como Heynen *et al.* (2007). Pero eso no podría explicar su ausencia total de, por ejemplo, el artículo reciente de Bakker (2010) publicado en *Progress in Human Geography.* Una gran excepción es el profético trabajo de Robertson (2004) sobre bancos de mitigación de humedales.

lugar, esbozaremos brevemente lo que supone un enfoque de conservación y por qué es importante.

La conservación y por qué importa

La conservación de la biodiversidad es un área increíblemente variada y podemos distinguir muchas estrategias diferentes; entre ellas, áreas protegidas, programas educativos, ecoturismo, planes de mitigación, pagos por servicios ecosistémicos, estrategias comerciales, programas de renaturación, entre otros (Salafsky *et al*., 2002). Existe una variedad asimismo amplia de instituciones dedicadas a la conservación, desde organizaciones no gubernamentales (ong) hasta agencias internacionales (como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN); asociaciones académicas (como la Society for Conservation Biology); Ministerios de Gobierno; instituciones comunitarias para la gestión de recursos locales; y —cada vez más— iniciativas comerciales. Dada esta diversidad, hablar de "conservación neoliberal" implica el riesgo de generalizar de forma indebida. Sin embargo, nuestro argumento es que es precisamente *porque* las estrategias e instituciones de conservación pueden ser tan variadas, y las similitudes que produce la conservación neoliberal tan omnipresentes, que es tan importante una comprensión y crítica sistemáticas de la conservación neoliberal (Igoe *et al*., 2010; K. MacDonald, 2010a).

Entre los críticos del "proyecto" neoliberal, existe una ausencia considerable de este tipo de análisis sobre la conservación. David Harvey (2003: 66-168), por ejemplo, tiende a observar la conservación ambiental como proveedora de alternativas que contrarresten de forma activa el capitalismo neoliberal. En *The new imperialism (El nuevo imperialismo*), su lista de luchas contra la acumulación por desposesión es también una letanía de protestas *ambientalistas*. Sin embargo, Harvey solo reconoce de refilón que los campesinos podrían ser despojados de sus tierras tanto por el establecimiento de un parque nacional como por una nueva granja de ovejas. En *A brief history of neoliberalism (Breve historia del neoliberalismo*) describe un "creciente movimiento ambientalista que trabaja arduamente promoviendo visiones alternativas para vincular mejor proyectos políticos y ecológicos"

sin rastrear las complejidades políticas que enlazan de manera firme algunos elementos de este movimiento a la economía política dominante (Harvey, 2005: 186; cf. Dowie, 2006). Si bien Harvey reconoce claramente el papel de las ONG en la promoción del neoliberalismo, no menciona entre ellas a las ONG conservacionistas (2005: 177). Así, claramente, la conservación no aparece en estos libros como foco de interés.

La comprensión de casi cualquier variante de la conservación como progresista y opuesta a las fuerzas que producen la crisis ambiental es en especial problemática cuando se utiliza un lenguaje alarmista sobre la situación para justificar políticas y prácticas que pueden resultar perjudiciales para los medios de vida locales (a menudo con la intención de apartar paisajes para la conservación ambiental) (Fairhead y Leach, 1996; Leach y Mearns, 1996; Stott y Sullivan, 2000).[5] Las críticas basadas en la crisis también ignorar el hecho de que *las crisis ambientales (y de otro tipo) son en sí mismas oportunidades para la expansión capitalista*. Martin O'Connor (1994) lo planteó así: "La crisis ambiental ha dado un nuevo ímpetu a la sociedad capitalista liberal. Ahora, al pretender hacerse cargo de salvar el ambiente, el capitalismo inventa una nueva legitimación para sí mismo: *el uso sostenible y racional de la naturaleza*" (1994: 125-126. Subrayado del original)[6].

Así, aunque la conservación se entiende por lo general como algo diferente, como "salvar al mundo" del excesivo y amplio impacto de la humanidad bajo el capitalismo, en realidad funciona para someter la naturaleza al capitalismo, mientras crea posibilidades económicas más amplias para la expansión capitalista. Los mercados se expanden para solucionar las crisis ambientales que han producido otras fuerzas del mercado. El capitalismo bien podría ser el *enemigo de la naturaleza* como lo describió tan bien Kovel. La conservación de la naturaleza, paradójicamente, parece haberse convertido en amiga del capitalismo.

---

5 Cf. Nygeres y Green (2000), Bernstein y Woodhouse (2001), Dressler *et al.* (2010), Brockington (2002). Desde luego, hay muchos buenos ejemplos de crisis; quizá sea oportuno aclarar en este punto que no somos escépticos del cambio climático y nos hemos opuesto al trabajo de personas como Bjorn Lomborg.

6 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen.

Así vemos que: 1) la conservación es de vital importancia para el capitalismo, y 2) que esta relevancia no es a menudo reconocida. Estas razones justifican la elaboración de una crítica sintética de la conservación neoliberal.

¿Por qué enfocarnos en la conservación *neoliberal*?

Una de las razones de ser del neoliberalismo es expandirse e intensificar el capitalismo global (Harvey, 2005). El capitalismo, a su vez, subyace en el corazón de los cambios dramáticos y de las crisis ecológicas desatadas en los últimos dos siglos (O'Connor, 1998; Foster, 1999; Kovel, 2002; Burkett, 2006).[7] Con el auge del capitalismo, los medios, la escala y el impulso para la transformación de los ecosistemas han crecido de forma espectacular. En interacción dialéctica con los desarrollos tecnológicos y el incremento de la extracción colonial (entre otros factores), las sociedades capitalistas emergentes se volvieron partidarias de "compensar" extralocal y extrarregionalmente las transformaciones ecológicas locales y regionales, sentando las bases para una crisis ecológica mundial o una "crisis de la ecología-mundo", en los términos de Moore (2010). Mediante (extensión) y dentro del espacio (intensificación), el capitalismo ha perturbado y transformado el metabolismo de los procesos y las conexiones ecológicas (Kovel, 2002: 82). Teniendo en cuenta los señalamientos anteriores sobre la crisis ambiental, aquí destacamos dos aspectos clave sobre la tendencia del capitalismo a incentivar crisis ecológicas de gran escala.

7 No se puede negar que la extensión y el alcance de los problemas ecológicos en nuestra era son cualitativamente distintos que en las anteriores. Esto, desde luego, no quiere decir que los problemas de degradación no existieran antes o que nunca colapsaron los ecosistemas a gran escala. Foster (1999: 34) aborda la idea de "periodos ecohistóricos": periodos en los que "las actividades humanas han conducido a cambios (relativamente) uniformes en la naturaleza en zonas vastas". Se refiere a "civilizaciones" tempranas como sociedades en las que el colapso ecológico se debía más notablemente a la destrucción del suelo y a una sobreproducción de comida; y las sociedades europeas medievales y feudales que tuvieron problemas parecidos que a menudo condujeron a la malnutrición, hambrunas, epidemias, alta mortandad (infantil), trabajo forzado, etc., aunque estas obviamente fueron desatadas también por relaciones feudales de clase extremadamente explotadoras. No obstante, todo esto permaneció de forma "(extra) regional" hasta el alza y globalización de las relaciones capitalistas de producción en los siglos XVII y XVIII.

El primero tiene que ver con la naturaleza de la crisis ecológica. La diversidad, la conectividad y las relaciones son cruciales para la resiliencia de los ecosistemas. En ecología básica se enseña a los estudiantes que "todo se relaciona con todo lo demás", y esta es la razón por la que estudiar los ecosistemas es tanto un placer como algo a la vez muy complejo. El afán del capitalismo por convertir todo en valor de cambio (en mercancías que pueden ser comercializadas) elimina estas conexiones y relaciones para producir, vender y consumir sus elementos constitutivos. Así, como señala Kovel (2002: 130-131), el capitalismo "separa", "divide" y —dado que en principio todo puede ser comprado o vendido— "enajena" y aleja. Así, acercar la conservación al capitalismo implica poner al descubierto los diversos enlaces y vínculos de los ecosistemas para que estos puedan seguir siendo objeto de distinción, comercialización y alienación, aunque en pro de la retórica de la conservación.

El segundo punto tiene que ver con la naturaleza del capital, que, como señaló Marx (1976: 256), es "valor en proceso, dinero en proceso: sale de circulación, vuelve a entrar, se conserva y multiplica en circulación, emerge de ella con un mayor tamaño y comienza el mismo ciclo una y otra vez". El capital siempre está en movimiento; si deja de moverse y circular, todo el sistema se ve amenazado. La reciente (y continua) crisis financiera ha dejado esto más que claro. Desde Washington y pasando por Londres hasta Tokio, los líderes de los países ricos estaban preocupados, sobre todo, por asegurar que los bancos de nuevo pudieran ofrecer préstamos para poner otra vez el dinero en circulación. Así, el capitalismo es intrínsecamente expansionista, y se esfuerza de continuo para atraer hacia su órbita más y más ámbitos de la vida, incluyendo mundos naturales en múltiples escalas.[8]

Establecer el valor de cambio (monetario) de la naturaleza para calcular qué precio hay que pagar para conservar sus servicios no supone, por tanto, solo intentar preservar los ecosistemas, como pretende la noción "pagos por servicios ambientales" actualmente tan popular. Se trata de encontrar nuevos espacios de operación para los mercados y, por tanto, de ampliar el ámbito de

8 McAfee (2003, p. 216), al discutir sobre la biotecnología, aborda el "neoliberalismo a escala molecular" y concluye que "este paradigma molecular-reduccionista, lejos de nacer de la biotecnología genómica, tiene una larga historia de apoyar el proyecto de la tecnociencia que apoya la acumulación en la agricultura, que apoya el control social y, cada tanto, agendas explícitamente eugenésicas". Cf. Prudham (2007).

acción y en última instancia, la circulación de capitales (Büscher, 2012). Los pagos van a parar a quienes pueden captarlos, en lugar de directamente a la naturaleza, y esto explica por qué las respuestas conservacionistas a la crisis ecológica, aunque se entienden de manera popular como una reacción a los efectos ambientales del capitalismo, ahora están abriendo vías muy importantes para una mayor expansión capitalista (Sullivan, en prensa). Una de las principales formas en que esto ha ocurrido es mediante la incorporación de herramientas analíticas de la economía neoliberal a la política y la práctica de la conservación, sin reconocer que estas a su vez están impregnadas y refuerzan posiciones ideológicas particulares con respecto a las relaciones entre humanos, así como con los no humanos.

Equiparar economía con ideología

El "capitalismo" rara vez se menciona en las prácticas y políticas de conservación. En cambio, muchos actores hablan sobre la necesidad de fomentar la conservación mediante la "economía", los mercados o los "pagos". Como argumenta Thrift (2005: 4), "el lenguaje de la economía [neoliberal] se ha convertido en parte del lenguaje común, lo cual vuelve cada vez más difícil concebir el mundo de cualquier otra forma más allá del cálculo de la oferta y la demanda". El razonamiento parece ser: "¿Los humanos necesitan (o demandan) 'servicios ambientales'? Entonces podemos garantizar su suministro por medio de pagos". Así, el lenguaje económico de las recientes soluciones políticas a la crisis ecológica orienta las intervenciones en determinadas direcciones —esto es, hacia los mercados y la innovación tecnológica— de un modo que podría decirse, y a menudo de forma intencionada, desvía la atención de las causas sistémicas de la crisis ecológica (y de la crisis socioeconómica asociada).

Sin embargo, las suposiciones implícitas acerca de que las personas maximizan racionalmente las oportunidades económicas y el énfasis en la inversión, los beneficios, el capital (natural), el crecimiento, los derivados, etc., demuestran que los valores normativos de la economía de la conservación son los del capitalismo neoliberal (Fine, 2009). Al mismo tiempo, los tipos de relaciones y actividades económicas que encontramos *dentro del sistema capitalista* (en contraste con otros sistemas económicos) rara vez se sitúan o se atribuyen de

forma explícita al contexto capitalista en los discursos dominantes de la conservación. Lo que queremos subrayar aquí es que las ideas sobre la economía son histórica y geográficamente diversas y se construyen de modo social, con consecuencias tanto en el ámbito social como en el ecológico. Por tanto, vale la pena desentrañarlas tanto para subrayar los significados específicos que se les atribuye en los esquemas dominantes de conservación de la biodiversidad como para señalar formas alternativas en que estos conceptos pueden entenderse y aplicarse al ámbito de la conservación.

El campo de la antropología económica es útil para distinguir entre el capitalismo y otros sistemas económicos (Gudeman, 2001). Los antropólogos económicos despliegan una definición y comprensión mucho más amplia de la economía, como una esfera social de producción, distribución y consumo, que garantiza el énfasis en los procesos económicos tal cual surgen y operan en contextos socioculturales y ecológicos específicos. En este sentido, la antropología económica hace eco de la teorización y el análisis de Marx sobre los sistemas económicos como modos de producción sociohistórica y culturalmente situados, aunque también va más allá de las aportaciones de Marx al ofrecer "descripciones densas" (Geertz, 1973) y análisis exhaustivos sobre arreglos socioeconómicos específicos. En otras palabras, en el contexto de los enfoques marxista y antropológico, cada sistema económico se entiende y se presenta de forma sustancial y, por tanto, como relativamente único en relación con otros sistemas económicos. En contraste, la economía liberal ortodoxa produce abstracciones generalizadas que ofrecen reglas formales y universales para explicar la emergencia y el funcionamiento de los procesos económicos. Dado el gran nivel de abstracción, los sistemas económicos (al parecer) se observan iguales en cualquier lugar y momento, con independencia de sus contextos específicos.[9] Las perspectivas antropológicas sobre la economía son conocidas como sustantivistas, mientras que la economía ortodoxa ofrece perspectivas formalistas sobre el mismo problema.

Las perspectivas formalistas asumen la existencia de agentes económicos individuales concebidos de forma abstracta cuya presunta racionalidad busca maximizar las ganancias económicas. En el plano general, la conducta colectiva

9 Irónicamente, los marxistas a veces cometen el mismo tipo de error en su crítica del capitalismo.

de los agentes económicos racionales se supone resulta en un funcionamiento óptimo del mercado y en su equilibrio. Por otro lado, los antropólogos han demostrado que los seres humanos reales en contextos del "mundo real" incorporan un sinfín de otros elementos a los procesos de toma de decisiones económicas, como las obligaciones sociales y familiares, y distintos valores culturales, incluyendo aquellos asociados a naturalezas no humanas (Graeber, 2001; Angelis, 2007).[10] Las decisiones económicas, por tanto, rara vez se pueden reducir a la maximización de la ganancia económica o el lucro, y contrario a los supuestos de la economía neoliberal ortodoxa, no dependen del acceso a toda la información necesaria para un rendimiento económico racional óptimo.[11] A su vez, mientras las perspectivas formalistas dan por hecho que los mercados responden de forma automática a la demanda general de agentes racionales totalmente informados (e.g. la demanda por ecosistemas sanos y resilientes anhelados por la conservación neoliberal), las perspectivas sustantivistas demuestran que las exigencias que se ven satisfechas, con frecuencia, son resultado de las posturas ideológicas dominantes y de los intereses de las elites (Neves, 2006).

El antropólogo Marcel Mauss, en la década de los veinte, decía que mucho de lo que la ciencia económica tenía que decir sobre la historia humana era impreciso, sobre todo en lo referente al papel del trueque y la naturaleza del intercambio. Como resume Graeber (2000):

> Al inicio, según la versión oficial, existía el trueque. Las personas se veían obligadas a obtener lo que querían intercambiando directamente una cosa por otra. Dado los inconvenientes de esto, a la postre inventaron el dinero como un medio universal de intercambio. El invento de otras tecnologías para el intercambio (el crédito, la banca, la bolsa de valores) fue solo una extensión lógica. El problema era, como rápido se percató Mauss, que no había razón para creer que una sociedad basada en el trueque hubiera existido alguna vez. En

10 Para los conocimientos y prácticas de valor no humanas en particular, cf. Berkes (1999), Posey (2004) y Viveiros de Castro (2004), entre otros. Un trabajo rico en filosofía ecológica y ética complementa estos análisis informados etnográficamente. Cf. Plumwood (2006) y Curry (2008).

11 Cf. la creciente producción teórica en economía sobre la importancia de la "racionalidad limitada" en la conducta económica, e.g., Simon (2008).

> cambio, lo que los antropólogos estaban descubriendo eran sociedades donde la vida económica se basaba en principios completamente distintos y donde la mayoría de los objetos se movían de aquí para allá como regalos —y casi todo lo que llamamos conductas "económicas"— se basaban en una pretensión de generosidad pura y en el rechazo al cálculo exacto de quién había dado qué a quién. Estas "economías del regalo" podían volverse altamente competitivas de vez en cuando, pero lo eran de una forma por completo opuesta a la nuestra: en vez de rivalizar para ver quién podía acumular más, los ganadores eran quienes lograban regalar más.[12]

Estos análisis concuerdan con las primeras observaciones de Marx en torno a que el capitalismo se presenta como un sistema económico que es inevitable y "natural", como si no fuera resultado directo de los intereses de poderosas élites, envuelto en capas de creencias ideológicas y apuntalado por desigualdades contingentes pero estructurales a lo largo de la historia. Por tanto, no es coincidencia que la economía sustantivista haya sido clave para revivir el pensamiento marxista en la década de los setenta. La potente combinación del análisis intercultural empíricamente sustentado con la economía marxista resultó en dos aportaciones esenciales con relevancia directa a los argumentos que aquí presentamos: 1) revelan la diversidad y los grandes matices en el funcionamiento de las economías en distintas sociedades a lo largo del tiempo y el espacio, y 2) muestran, precisamente, lo distinta que es la economía capitalista contemporánea en términos históricos y culturales.

Un aspecto adicional de esta diferencia del capitalismo es su atención en el futuro, acompañada por el menosprecio al contexto histórico y la conciencia. Para las empresas, el desempeño del año pasado es importante principalmente como un punto de referencia para el desempeño de este

12 Desde una perspectiva formalista, así como para los economistas evolutivos, tal comportamiento desde luego se entendería desde una motivación en algún nivel por un interés propio calculado: al "tomar decisiones racionales respecto a la asignación de recursos escasos con el fin de obtener la mayor cantidad posible para uno mismo", como nota Graeber (2001, p. 28). Sin embargo, como argumentan Graeber y otros, esto sirve para "tirar al bebé con el agua de baño" —i.e., para negar que es posible que existan suposiciones cualitativamente diferentes para la organización social y las relaciones "sociedad-naturaleza"—. Cf. Nurit Bird-David (1992).

año y el siguiente. El futuro, no el pasado, es la única vía para aumentar las ganancias.[13] La política de desarrollo contemporánea hace eco de esto, y al respecto Mosse (2005: 1) observa que: "Mejores teorías, nuevos paradigmas y marcos alternativos son constantemente necesarios; en el ámbito de las políticas de desarrollo la orientación siempre es hacia el 'futuro positivo'". De forma similar, en la conservación, las ideas sobre un "futuro sostenible" rara vez son templadas mediante una discusión sobre nuestro pasado (reciente) bastante insostenible. En cambio, parece suceder lo contrario. Cómo elabora Stahel (1999: 124):

> Solo dentro de un marco de tiempo mecánico se puede concebir la valoración económica de especies aisladas. Es también sólo dentro de este marco que puede suponerse que el valor global de la biodiversidad de los ecosistemas proviene de una simple suma de valores aislados, mientras se ignoran las propiedades emergentes que surgen de las interrelaciones e interdependencias entre las distintas especies dentro de un todo.

Mediante estos esfuerzos de valoración (en la actualidad muy comunes),[14] se refuerza aún más la disciplina del tiempo mecánico y lineal del capitalismo, que funciona bien para vincularse conceptualmente con los métodos de valoración económica y de comodificación, pero que tiene implicaciones

13 Desde luego, los artefactos históricos que pueden brindar ganancias en el futuro son la excepción aquí; ciertamente, a menudo son convertidos en espectáculos con fines de lucro.

14 Cf. el proyecto Natural Capital Project de The Nature Conservancy (TNC), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Universidad de Stanford, un proyecto a diez años para desarrollar herramientas para modelar y mapear el valor económico de los servicios ecosistémicos para construir una "base de datos de capital natural" global (www.naturalcapitalproject.org); aries (Inteligencia Artificial para Servicios Ecosistémicos), un proyecto de Conservación Internacional (CI) y socios para crear "una tecnología cibernética […] para brindar asistencia a usuarios alrededor del mundo en evaluaciones rápidas de servicios ecosistémicos y valoraciones en múltiples escalas, de lo regional a lo global" (http://www.conservation.org/FMG/Articles/Pages/mapping_natures_benefits_ARIES.aspx); y el programa para la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (www.teebweb.org) de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: una iniciativa de investigación masiva que identifica la falta de precios en el mercado para servicios ecosistémicos y biodiversidad como el detonador clave tanto de la pérdida de la biodiversidad como de los impactos negativos en el bienestar humano, donde la asignación de precios a la naturaleza para el mercado se considera clave para la salud económica y social.

cuestionables para la biodiversidad (Walker *et al*., 2009; Burkett, 2006; Robertson, 2008).

Al no reconocer estas contribuciones, la corriente dominante de la conservación equipara una "economía" en apariencia general y su terminología con la ideología y las prácticas del capitalismo neoliberal. Aún más fundamental, este error equipara las prácticas económicas generales de los seres humanos (la conceptualización, la producción, la distribución y el intercambio de bienes y servicios) con la ideología particular del neoliberalismo (como se define arriba). Estas confluencias a menudo se repiten en el ámbito más amplio de la economía ecológica con su énfasis en la "economía de Coase", que supone la emergencia de óptimos sociales y ambientales mediante incentivar el trueque entre quienes poseen propiedades privadas (Muradian *et al*., 2010).[15] Al delinear este argumento, buscamos subrayar nuestra preocupación central por la manera en que ciertas ideologías, erróneamente consideradas como descripciones objetivas y universales de la actividad económica humana, llegan a configurar el pensamiento económico y a producir discursos despolitizados sobre las políticas de conservación.

Crítica sintética de la conservación neoliberal

Sugerimos aquí que nuestra crítica a la conservación neoliberal puede sintetizarse en tres puntos principales: 1) la estimulación y el encubrimiento de las contradicciones; 2) la apropiación y la tergiversación, y 3) el disciplinamiento del disenso. Estos tres puntos componen un marco que resume las intenciones y los resultados de la conservación neoliberal, las tensiones entre estos y cómo se resuelven. Al explorar cómo el cuerpo teórico sobre la conservación neoliberal aborda estos tres puntos, esperamos mostrar cómo la conservación neoliberal está embebida y contribuye al amplio fracaso de las ideas y políticas dominantes del "desarrollo sostenible".

15 Véase también el libro de Burkett, *El marxismo y la economía ecológica*, donde busca crear un diálogo productivo entre los "bandos" de marxistas y economistas ecólogos. No obstante, y a pesar de su valiosa aportación, está lejos de penetrar las economías ecológicas dominantes, por lo cual reiteramos este argumento aquí.

Estimulando las contradicciones

Todos los sistemas ideológicos son susceptibles a sus propias contradicciones, aunque varían los grados de contradicción. El capitalismo contiene diversas contradicciones profundamente arraigadas y, como vimos, aquellas relacionadas al ambiente son relevantes en particular. James O'Connor (1998: 165) se refirió célebremente a la "segunda contradicción del capitalismo" como "la manera en la que el poder conjunto de las relaciones de producción capitalista y las fuerzas productivas se autodestruyen al dañar o destruir, en lugar de reproducir, las condiciones necesarias para su propia reproducción". La segunda contradicción se produce cuando el ánimo de lucro es la fuerza que impulsa las relaciones entre las personas y la naturaleza: la demanda de beneficios económicos prevalecerá sobre los resultados sociales y ambientales positivos siempre que entre en contradicción con ellos. Este es un dicho común en muchos análisis críticos del capitalismo y, de hecho, entre sus defensores. Como afirma el especulador de divisas internacionales George Soros:

> Si permitiera que las consideraciones morales influyeran en mis decisiones de inversión, me volvería un competidor fracasado. Y no influiría en modo alguno en los resultados, porque habría otra persona que ocuparía mi lugar a un precio ligeramente diferente (en McQueen, 2003).

En este sistema, por tanto, la inversión y la especulación en servicios ecosistémicos y en mercados de biodiversidad sólo pueden preocuparse por su propia rentabilidad. Cualesquiera que sean los sentimientos personales de cualquier inversionista individual, el mercado se asegurará de que la ganancia sea siempre *la* primera consideración.

El neoliberalismo intensifica estas contradicciones al facilitar mayor libertad para las fuerzas que las impulsan. Michel Foucault, por ejemplo, describió el crecimiento económico como "la única política social verdadera y fundamental" del neoliberalismo —con que da a entender que, bajo la ideología neoliberal y su fetichización en lo que llama "el régimen de verdad del mercado", el crecimiento económico se transforma en *el* supuesto prerrequisito para resultados positivos sociales y ambientales en

la actualidad (Foucault, 2008; Fletcher, 2010). La conservación neoliberal supone lo anterior con la esperanza de que la contradicción ecológica subyacente del capitalismo pueda resolverse por medio del mismo funcionamiento que produce esta contradicción. En otras palabras, el axioma central de la conservación neoliberal es que para "salvar" las naturalezas las acciones de "protección de la naturaleza" deben incorporar la producción de ganancias, si no, habrá poco incentivo para que la procuren los actores racionales. La consecuencia tautológica de esta lógica es que en un mundo donde los Estados tienen cada vez menor capacidad para implantar programas para el "bienestar de la naturaleza", la única solución para los problemas ambientales será incorporar la conservación de la naturaleza a los mercados e impulsar la inversión privada en diversas naturalezas conservadas (Caldecott y Dickie, 2011; Briggs *et al*., 2009).[16]

La conservación neoliberal plantea esta inversión (de la "segunda contradicción") en términos de ganar-ganar, transformando la misión de salvar al "mundo natural" su principal interés/preocupación, y sosteniendo, al mismo tiempo, que los medios para lograrlo residen en la comodificación de la naturaleza, para lograr tanto el crecimiento económico como la sustentabilidad ecológica. De esta manera, privilegia como solución las mismas estructuras y procesos del capitalismo neoliberal que producen los daños socioecológicos que busca reparar.

Las contradicciones que surgen de la combinación del capitalismo neoliberal y la conservación son muy peculiares y tienen grandes consecuencias. El crecimiento económico se convierte, paradójicamente, en *el* prerrequisito para tener ecosistemas sanos, cuya conservación a su vez es la base para el crecimiento económico futuro. Esto es peligroso, pues la relación entre el crecimiento económico y la salud del ecosistema se comprende desde una perspectiva muy selectiva que elimina la información que sugiere que el crecimiento económico podría ser dañino tanto en términos de las variables ambientales (Harvey, 2005; Saad-Filho y Johnston, 2005) como por aumentar la inequidad en la distribución de la riqueza (Le Que're' *et al*.,

16 Las siguientes páginas web, entre otras, ejemplifican la actual popularidad de este enfoque: www.ekocamp.com, http://www.businessgreen.com/, http://www.ecosystemmarketplace.com/

2009; Norgaard, 2010). Estos razonamientos, por ejemplo, consideran que el ecoturismo aporta soluciones de conservación locales y nacionales, sin considerar su contribución destructiva a los problemas ambientales a diversas escalas (Duffy, 2010). Es en particular sorprendente observar cómo los científicos naturales, quienes por lo regular se enorgullecen de basarse en datos cuantitativos, parecen negarse a aplicar el mismo rigor empírico cuando extienden su trabajo al ámbito de las ciencias sociales (y económicas).[17] Tales paradojas son ejemplos clásicos de lo que el antropólogo Gregory Bateson llamó pensamiento "en bucle cerrado". Él lo consideraba una característica patológica: al no incorporar los procesos más amplios de los que forma parte, las acciones autocorrectivas de un sistema en mal funcionamiento perpetúan las condiciones que causan la enfermedad, mientras que brindan una ilusión temporal de mejoría. En la conservación neoliberal, al someter los procesos más amplios de la sostenibilidad ecosistémica a la lógica y las premisas limitadas de la economía liberal ortodoxa, la conservación neoliberal ignora la retroalimentación correctiva de los enredos entre humanos y no humanos a los que da forma y de los que depende. Inmersión ideológica significa que los protagonistas de la conservación neoliberal se tornan incapaces de aceptar sus efectos potencialmente dañinos, aun cuando humanos y no humanos podrían estar comunicando tales efectos.

Del pensamiento de tipo bucle-cerrado se desprenden diversas técnicas ideológicas y las contradicciones, de este modo, se incrementan. Estas actúan como filtros que convierten a la conservación —una empresa intrínsecamente política— en una iniciativa neutral que responde a cambios técnicos y *apolíticos* (Ferguson, 1994; Büschser, 2010c). Así, la conservación neoliberal tiene fuertes vínculos con la gestión ambiental, como sugiere Redclift (1988: 638), y con la modernización ecológica, como propone Hajer (1995). Ambas comprensiones destacan la manera en que los problemas ambientales se enmarcan y entienden, sobre todo como asuntos de "gestión" técnica, justo porque dejan muchas cuestiones sin tocar ni mencionar.

17 Como observó uno de nosotros en particular en una encuesta de las reuniones de 2009 de la Society for Conservation Biology, detallado en Büscher (2008).

La conservación neoliberal adopta entonces la apariencia de ser un proceso de diseño técnico para incentivar a los actores interesados (vistos como maximizadores predecibles de la utilidad) en producir los resultados deseados. Como argumenta Fletcher (2010), la lógica que hay detrás de incorporar a las estrategias de conservación el potencial para generar ganancias económicas futuras, se extiende al supuesto de que la motivación humana se define principalmente por la ganancia personal, y que el efecto general la acción humana conducida de esta forma da lugar a un aumento del bienestar y la prosperidad colectivas. Una de las metas centrales de la conservación neoliberal, por tanto, es impulsar transformaciones que incentiven a las personas a "maximizar la utilidad" a fin de que se comporten en formas predecibles y coherentes con los objetivos de la conservación. Por ejemplo, en un ensayo reciente en *Frontiers in Ecology and the Environment*, Mandel *et al.* (2010: 3) sugieren que "[s]i el intercambio de productos derivados de especies fuera permitido de forma responsable", entonces "aquellos que actualmente no incorporan una ética de la conservación en sus decisiones económicas podrían beneficiarse modificando su conducta hacia el cuidado ambiental". Estas afirmaciones implican cierta confianza en que los equipos de ecólogos matemáticos y economistas pueden combinar de forma compleja la rentabilidad con medidas para mantener sanos los ecosistemas, y producir resultados concretos en conservación, incluso cuando la naturaleza que pretende ser conservada se compone abstracciones poco intuitivas y cada vez menos fundamentadas (Sullivan, 2010; Walker *et al*., 2009).

Desde luego, no todos los conservacionistas son seducidos por los encantos de las soluciones neoliberales (Redford y Adams, 2009; Child, 2009; Chan *et al*., 2007). Varios de ellos, en realidad, son bastante francos: Walker *et al*. (2009: 155) concluyen que "el comercio viable de la biodiversidad y su protección significativa parecen ser mutuamente excluyentes", mientras que Peterson *et al*. (2009: 115) argumentan que "los esfuerzos para mercantilizar las funciones ecosistémicas como servicios ecosistémicos para la humanidad podrían resultar, en algunos casos, nocivos para la conservación de la biodiversidad". Aunque más adelante retomamos estos y otros ejemplos de biólogos de la conservación críticos, estas ideas

parecen ser excepciones. En general, las soluciones neoliberales para la conservación se muestran como consensuadas y el disenso rara vez es visible. Las principales preguntas son, entonces, ¿por qué tantos conservacionistas están retomando políticas de conservación neoliberales y por qué es inusual escuchar las voces de quienes no lo hacen? Nuestra respuesta es precisamente que, dado que la conservación neoliberal funciona como una *ideología*, esta se incrusta socialmente (y ecológicamente) al generar estructuras y prácticas de gobernanza hegemónicas por medio de las cuales se reproduce.

Como ideología, hay que creer en ella; sus principios centrales no deben cuestionarse. De hecho, cuestionar los supuestos implícitos de la conservación neoliberal puede ser peligroso desde el punto de vista político, ya que quienes lo hacen se arriesgan a sufrir diversas formas de disciplinamiento. En cambio, se cree que las contradicciones profundamente arraigadas de la conservación neoliberal se pueden gestionar o superar al no reflexionar sobre ellas, o bien simplemente aplicando las recetas neoliberales de forma más dinámica y enérgica. Así, muchos conservacionistas parecen elegir el camino seguro de la conservación (es decir, la gestión de las crisis ecológicas) mediante la creación de mercados para los productos de la conservación (por ejemplo, por medio del turismo, la caza de trofeos, los pagos por servicios ambientales, los sistemas de compensación de la biodiversidad, etc.), mientras que las voces disidentes o "desobedientes" que intentan evidenciar las contradicciones y encubrimientos de la conservación neoliberal son silenciadas de diversas maneras.

La conservación neoliberal se convierte así en una contribución esencial a la contradicción más profunda del neoliberalismo: la capacidad de sus partidarios para producir y favorecer discursos en apariencia libres de contradicciones, mientras que de hecho estas saturan sus prácticas (Büscher, 2010a). Una parte importante del atractivo y la omnipresencia del neoliberalismo reside justo en esta capacidad para conformar y estimular discursos orientados al consenso, a pesar de sus realidades cada vez más contradictorias (K. MacDonald, 2010a). Dicho con mayor contundencia, sugerimos que el propósito mismo de estos discursos es ocultar

discursivamente realidades contradictorias para otorgar mayor legitimidad a la expansión neoliberal (Büscher, 2010a).

Apropiación y distorsión

La conservación como un ámbito que se percibe popularmente como contestatario a los excesos ambientales de la lógica capitalista se encuentra en una posición única para (re)presentar el mensaje general del neoliberalismo que sugiere que el crecimiento económico y la protección de la naturaleza son proyectos compatibles en esencia. Lo consigue de forma eficaz y se propaga mediante el uso de lo que diferentes analistas han denominado "virtualismo" (West y Carrier, 2004), "simulacro" (Baudrillard, 1981), "naturaleza derivada" (Büscher, 2010b) y "espectáculo de la naturaleza" (Igoe, 2010): la configuración de las relaciones y expectativas entre el ser humano y su entorno, la producción, distribución y consumo masivo de formas de representación modernas y replicables. El teórico de los medios de comunicación y revolucionario Guy Debord (1992 [1967]) definió el espectáculo como "la mediación de las relaciones sociales entre los seres humanos mediante la imagen". Aquí ampliamos esta definición para incluir "la mediación de las relaciones entre las personas y el entorno mediante imágenes" (Igoe, 2010). Sin embargo, es importante señalar que el espectáculo no puede reducirse a la "mera imagen". Es mucho más que una representación abstracta. Como explica Debord:

> El espectáculo que invierte lo real en realidad es producido. La realidad vivida es materialmente invadida por la contemplación del espectáculo que al mismo tiempo absorbe el orden espectacular, dándole cohesión positiva.

Algunos breves ejemplos sirven para ilustrar cómo el "espectáculo" influye tanto en la aprobación como en la distorsión de ciertas relaciones entre la sociedad y el ambiente, sosteniendo las contradicciones que mantienen la ideología de la conservación neoliberal, y moldeando en el proceso las relaciones entre la sociedad y el ambiente en el "mundo real". Haciendo eco de la creación de paisajes propios de los parques nacionales que los colonos establecieron en Estados Unidos, es decir, como paisajes vacíos

de (determinadas) personas, los modelos de naturaleza prístina del siglo xix se impusieron en paisajes de África Oriental como las llanuras del Serengeti. Con el tiempo, el Serengeti se ha convertido en un icono de la naturaleza africana, incluso de África en sí misma. A mediados de la década de los cincuenta, películas como *Hatari* (protagonizada por John Wayne) y *Serengueti no debe morir*, un documental producido por el conservacionista austriaco Bernard Grzimek, llevaron las imágenes de la "naturaleza prístina" del Serengeti a las pantallas de cine y televisión alrededor del mundo. *Serengueti no debe morir*, ganadora del Oscar por mejor documental en 1957, fue clave para incrementar el apoyo público a la creación de un parque nacional que provocó la expulsión de personas del Serengeti. Producciones subsecuentes de Grzimek abrieron el mercado de visitas al Serengeti en la década de los sesenta, y al mismo tiempo los conservacionistas occidentales presionaban a los dirigentes de los nuevos países independientes de África Oriental para que mantuvieran los parques creados bajo el colonialismo, como una fuente crucial de desarrollo económico. En las décadas posteriores, las imágenes de naturalezas similares a la de Serengueti se han convertido en un elemento esencial para movilizar a personas y recursos en favor de intervenciones de conservación específicas para una amplia gama de paisajes por parte de redes híbridas de ong, funcionarios estatales e intereses comerciales (Igoe, 2010). Estos paisajes africanos idealizados se han convertido en la inspiración para crear "paisajes de parques nacionales" africanos —poblados por una fauna espectacular y solo por visitantes que pagan por entrar, la dirección del parque y los empleados de los servicios necesarios— en localidades tan lejanas como Kent, en el Reino Unido.[18]

Este tipo de transformaciones han creado muchas oportunidades para el "greenwashing", al decidir mostrar sistemáticamente sólo algunos fragmentos de la realidad, destacando algunas conexiones y ocultando otras. Así, por ejemplo, un comercial del jabón de trastes Dawn retrata la función que desempeña este producto en el rescate de los animales en derrames

18 Como es el caso de la creación del Parque Safari Fort Lympnae, en Kent, que atrae visitantes a su Experiencia de Safari Africano "real". Discutida en Sullivan (2001).
N. de T.: No se encontró la referencia bibliográfica completa de Sullivan (2001).

petroleros, pero oculta el hecho de que Dawn no podría producirse ni distribuirse en supermercados sin la misma sustancia de la que salva a esos animales. La campaña de African Wildlife Fund (AWF) para proteger la fauna silvestre de África mediante la donación un celular viejo oculta los impactos socioambientales de las minas de litio en África Central, al mismo tiempo que les recuerda de forma abierta a las personas que es hora de conseguir un celular nuevo. La campaña por los animales en peligro de extinción de la Cajita Feliz de McDonald's busca convencer a los consumidores de que pueden ayudar a acabar con el calentamiento global mediante la alianza entre McDonald's y Conservación Internacional para proteger las selvas tropicales, sin reconocer los impactos ambientales que tiene la producción de alimento para animales a partir de soya ni el papel central de McDonald's en la promoción y expansión del uso del automóvil en Estados Unidos. Las tarjetas de crédito estampadas con fotos de animales en peligro de extinción y los logos de las ONG conservacionistas alientan a los consumidores a "salvar al planeta con cada compra", y la lista sigue y sigue.[19]

Más allá de los evidentes incentivos que esto crea para el patrocinio corporativo de la conservación neoliberal, la tendencia también señala el papel emergente de la conservación neoliberal en la producción de naturalezas que parecen trascender las contradicciones del capitalismo. Así, el espectáculo en la conservación neoliberal entreteje la publicidad, la mercadotecnia y la gubernamentalidad, y abre nuevos espacios de conservación para la expansión capitalista, mientras su publicidad sugiere que esta situación no supone contradicción alguna con la integridad ecológica ni con la equidad social (Brockington, 2009; Igoe, 2010).

Lo anterior es vital para la apertura de nuevos ámbitos de inversión mientras, al mismo tiempo, se consolida la *apariencia* de un consenso general con los supuestos ideológicos del capitalismo neoliberal. En resumen, por medio del espectáculo, junto con la creación de productos derivados y la aplicación de estrategias "gerenciales" a la práctica de la conservación, la conservación neoliberal

19 Cf.http://www.lifelineforafrica.com/africanWildlifeFoundation.html; http://www.projectplanetcorp.com/index.php?go=waysToSave; http://www.conservation.org/discover/partnership/corporate/Pages/mcdonalds.aspx; http://www.youtube.com/watch?v=hcv7-B8e02g.

es capaz de ubicarse más allá de las contradicciones que estimula, incluso cuando se apropia y tergiversa estas contradicciones de forma sustancial.

Por tanto, Igoe *et al* (2010)— siguiendo a Antonio Gramsci y Lesley Sklair— argumentan que la conservación neoliberal forma parte del actual "bloque histórico de desarrollo sostenible". Según Gramsci (1971), un bloque histórico es un momento donde diversos grupos con intereses particulares compartidos se unen para formar una clase dominante y sus ideas llegan a dominar las formas en que otras personas aceptan ver el mundo y pueden hablar de él. Como describen Goldman y Papson (2006: 9):

> En una notable sincronía, los partidarios de la sostenibilidad y los neoliberales se han unido para rehacer la naturaleza en el Sur, transformando vastas zonas de tierras no capitalizadas y gestionadas por las comunidades en zonas reguladas transnacionalmente para la tala comercial, la bioprospección farmacéutica, los cultivos comerciales orientados a la exportación, la conservación de la megafauna y el ecoturismo de élite.

El bloque histórico del desarrollo sostenible, según Sklair (2001), es un momento histórico donde una clase transnacional de directores generales, profesionales, oficiales del Gobierno y burócratas, líderes de ONG, comerciantes y medios de comunicación colaboran para superar las crisis señaladas ofreciendo soluciones fáciles basadas en el consumo para problemas socioecológicos complejos. A esto añadiríamos que también producen versiones de la naturaleza que se prestan a la intervención tecnocrática para producir los discursos "de ganar a lo grande" antes mencionados.

El trabajo pionero de Ken MacDonald aborda estas realidades en el Congreso Mundial de Conservación en Barcelona. El congreso, organizado y patrocinado por la iucn, se realiza cada cuatro años y es la reunión global más importante de su tipo. MacDonald (2010b) argumenta que esas reuniones de alto perfil son campos esenciales para la reproducción social y cultural (y por consiguiente de investigación), así como momentos donde los conservacionistas se reúnen como una comunidad global tangible (a diferencia de una imaginaria) reafirmando sus valores y creencias. Vale la pena citar a detalle su descripción del despliegue del espectáculo en la producción y

organización de una visión de creencias y valores poderosamente hegemónica y consistente con la conservación neoliberal:

> Se anunció la presencia de la realeza europea al público reunido que entonces tuvo que esperar […] [A esto] le siguió una procesión de personajes célebres, distinguidos por los listones rojos pegados a sus gafetes (distintos a los verdes que portaban los asistentes regulares). La ceremonia misma hacía un guiño a las cortes reales del pasado mientras los músicos acompañaban enormes presentaciones de video en el escenario principal; mágicamente aparecían actores entre el público para "debatir" distintas posturas ideológicas a la "crisis ambiental que todos enfrentamos"; surgían en el escenario acróbatas y cirqueros que actuaban y revelaban grandes pancartas colgantes grabadas con las palabras: "Sostenibilidad", "Conciencia", "Equidad", "Biodiversidad" y "Acción", y celebridades como Mohammed Yunnus, David Attenborough (por video) […] aparecieron en el escenario para brindar unas palabras. La mañana siguiente el pleno de apertura fue igual de espectacular. Ted Turner fungió como la celebridad;[20] se presentó una alianza entre iucn y Nokia para impulsar por medio de la tecnología de comunicación móvil la participación de la juventud en el movimiento ambientalista, y hubo un falso debate entre panelistas moderado por un anfitrión de televisión de Sudáfrica. Ciertamente, este "debate" es útil para enfocarnos en el trabajo realizado por el espectáculo, pues por mucho que el espectáculo sirva para mediar, también tiene que ser mediado y organizado. Este es el trabajo del moderador, experto en producción de televisión, de modo que ver el "debate" desarrollarse en el escenario era muy parecido a ver un programa de televisión. Todo el acto pareció un programa de entrevistas, y probablemente era lo que se pretendía. Desde el principio quedó claro que el público no era más que espectador. Y en todo esto, la narrativa organizada por los organizadores yacía bajo la superficie: estamos todos juntos en esto y debemos "avanzar" y trabajar con el sector privado.

20 Ted Turner es un magnate de medios y filántropo estadounidense. Fue pionero del concepto del noticiero de veinticuatro horas y fundó Cable News Network (cnn), así como la primera "superestación" de cable, wtbs. También estuvo casado brevemente con Jane Fonda. Para averiguar más sobre Ted Turner, véase http://www.biography.com/people/ted-turner-9512255.

El espectáculo también es vital para la producción de lo que Büscher (2010b) denomina "naturaleza derivada", en el que se hace un uso selectivo de los paisajes sociales y materiales como activos subyacentes para el tipo de imágenes y *slogans* sobre los circuitos globales de turismo y consumo. Asimismo, Garland (2008: 62) afirma que la conservación "reclama el capital intrínseco o natural" y le agrega valor "por diversas mediaciones, y finalmente lo transforma en un capital más moldeable y con más ramificaciones globales". Büscher (2010b) argumenta que, en muchos contextos, las naturalezas derivadas "con ramificaciones globales" alcanzan mayor poder y valor que los bienes materiales originales de los que derivaron. Como las marcas se convierten en "mecanismos que facilitan una valoración directa […] de la capacidad de la gente para crear confianza, afecto y significados compartidos: su capacidad para crear algo en común" (Goldman y Papson, 2006: 336). La marca asociada a los ámbitos de la conservación transfronteriza es un buen ejemplo de ello. Estas zonas de conservación que atraviesan fronteras internacionales son promovidas bajo el emblema de "Parques para la paz" para subrayar las supuestas ventajas para instaurar la paz de la conservación transfronteriza. Investigaciones realizadas en Sudáfrica han demostrado que los "Parques para la paz" detonan contradicciones parecidas a otras intervenciones neoliberales de conservación, si bien, aunque a menudo a mayor escala, resulta especialmente irónico que también se promuevan como como "la solución global" (Büscher, 2010a).

Brockington y Scholfield (2010) e Igoe (2010) sostienen que las ONG conservacionistas se encuentran entre los principales productores y proveedores de este tipo de "naturalezas derivadas", si no los principales, basándose en un proceso sistémico más amplio de integración y estructuración de "mundos" económicos y ecológicos, que Igoe denomina "naturaleza ecofuncional". En este contexto del bloque histórico del desarrollo sostenible, la naturaleza ecofuncional se convierte en la naturaleza derivada por excelencia. Es una construcción y representación de la naturaleza en la que el crecimiento económico y el funcionamiento adecuado de los ecosistemas pueden optimizarse y sincronizarse mediante intervenciones tecnocráticas supervisadas por expertos. Por medio de la naturaleza ecofuncional, el hiperconsumo y la sostenibilidad

ambiental se consideran proyectos fundamentalmente compatibles. Estas interpretaciones justifican y mitifican el tipo de intervenciones descritas anteriormente por Goldman y Papson. Permiten creer que el carbono emitido por un todoterreno en Los Ángeles puede reabsorberse en las selvas del Congo e Indonesia. Son esenciales para la idea de que las actividades que destruyen el ambiente, como la minería, la explotación petrolera y las presas hidroeléctricas, pueden mitigarse reservando otras tierras en compensación por los daños que causan. Estas compensaciones se presentan como éxitos de la conservación y benefician a las ONG conservacionistas, a las empresas turísticas, a las elites locales y nacionales, y a las agencias, fundaciones e instituciones financieras internacionales que las financian. También ayudan a los países y las comunidades a encontrar su ventaja competitiva en la economía mundial. Proporcionan una imagen ecológica a países y empresas con un mal historial en materia de derechos humanos y medio ambiente (C. MacDonald, 2008; Dowie, 2009; Dowie, 1995; Dressler, 2011). Rehacen grandes partes del mundo según las fantasías de los turistas occidentales y promueven la idea de que el ecoturismo es una actividad "no consumista" que, de hecho, es sinónimo de conservación de la naturaleza (Duffy, 2006). Permite a los consumidores creer (o al menos comportarse como si lo creyeran) que todo lo que tienen que hacer es consumir para conservar. Aprovecha las dimensiones del capitalismo que son divertidas y aparentemente sin contradicciones: juega con la "loca vitalidad" y la "extravagante simbiosis" del capitalismo para conseguir el compromiso al tiempo que minimiza la reflexión (Thrift, 2005: 1).

La conservación neoliberal parece entonces haber encontrado un nicho especializado y en expansión dentro de la economía mundial actual. Proporciona uno de los medios por los que el capitalismo es capaz tanto de expandirse como de asegurar las condiciones de su reproducción. En otras palabras, realiza una labor esencial al otorgar a la ideología del neoliberalismo la apariencia exclusiva y excluyente de una realidad objetiva y de sentido común (Harvey, 2005). Al hacerlo, sin embargo, choca con valoraciones alternativas sobre las relaciones "humano-humano" y "humano-naturaleza", las aprueba o las socava. Cuando estas prácticas afectan o amenazan la realidad consensuada y espectacularizada de la conservación neoliberal, pueden estar sujetas a formas de disciplinamiento

que se centran en los supuestos ideológicos que se han convertido en hegemónicos.

El disciplinamiento del disenso

Está bien documentado que los paisajes de conservación fabricados y las contradicciones vinculadas que se acaban de describir van acompañados de innumerables formas de desplazamiento local y violencia estructural cotidiana, las cuales van desde los desalojos forzosos hasta la restricción del acceso a los recursos, pasando por la eliminación más sutil de las prácticas de producción de valor (Brockington, 2002; Brockington e Igoe, 2006; Adams y Hutton, 2007; Harper, 2007; Agrawal y Redford, 2009; Dowie, 2009).[21] Los sistemas autónomos de producción de alimentos, mantenidos durante siglos, tienden a ser considerados de forma negativa y criminalizados en favor de paisajes de biodiversidad pura, creados paradójicamente al servicio de estilos de vida, agendas y deseos de consumo no locales, con un impacto ambiental global quizá mayor (Adams, 2008; Brockington, 2009).

Lo que casi no se reconoce es la labor que se realiza para disciplinar las opiniones discrepantes. Los científicos sociales que participan en el Proyecto Ranomafama del Parque Nacional de Madagascar, financiado por usaid, han sido expulsados sistemáticamente del proyecto o del país cuando sus conclusiones contradicen los discursos defendidos por la administración del parque (Harper, 2008). La principal ong financiada por usaid amenazó con emprender acciones legales contra los líderes locales acusados de incitar a una marcha de protesta para poner de manifiesto la creciente preocupación por la aplicación neoliberal y divisiva de la cbnrm,[22] en el noroeste de Namibia, y posteriormente ejerció una fuerte presión para que se retirara un trabajo publicado en el que se analizaron las complejidades de este

21 Lo que indica que sean resultados significativos de esfuerzos de conservación es el establecimiento "al interior", en 2010, de la Iniciativa de Conservación sobre Derechos Humanos (CIHR), establecida por la iucn y las grandes ong de conservación clave (http://www.iucn.org/about/work/programmes/social_policy/scpl_cihr/).

22 Las siglas cbnrm representan Community-Based Natural Resource Management (Gestión Comunitaria de Recursos Naturales).

acontecimiento (Sullivan, 2003; Paudel *et al*., 2007). En un taller celebrado en 2008, varios investigadores y activistas de diversos contextos compartieron historias de acoso, abuso y amenazas por parte de los protagonistas de la conservación neoliberal cuando intentaban hablar y escribir sobre las contradicciones e injusticias que resultan de los esfuerzos de conservación financiados internacionalmente (Igoe y Sullivan, 2009).

Pero en una economía política neoliberal no siempre es necesario suprimir las opiniones diferentes para disciplinarlas. De hecho, pueden —perversamente— estimularse como una especie de catarsis, sin que ello repercuta en el sistema hegemónico más amplio. Así, como ya se ha mencionado, vemos voces discrepantes en algunos de los principales medios de difusión de la biología de la conservación, en particular la revista *Conservation Biology*, cuyo editor fundador argumentó que:

> …la reducción de todos los problemas de conservación en términos económicos es peligroso y contraproducente. Confiar en las fuerzas del mercado y en las leyes de la oferta y la demanda para corregir las inequidades y restaurar equilibrios sanos no funciona en la economía, y definitivamente no funciona en la conservación (en Ehrenfeld, 2008: 1092).

Aunque dignos de mención y loables en términos periodísticos, la cuestión es si este tipo de mensajes pueden constituir un desafío serio para el avance de la conservación. Por lo que podemos discernir de las fuentes en línea, este tipo de mensajes (obviamente) no reciben ningún crédito ni atención en plataformas de conservación proneoliberales como www.ecosystemmarketplace.com y otros estudios mencionados arriba. Y lo que es más grave, las organizaciones y los medios de comunicación dominantes suelen ignorar los mensajes críticos y, si los reconocen, a menudo los niegan o los distorsionan para adaptarlos a determinados objetivos neoliberales. Un ejemplo interesante es la reciente polémica en torno al gigante de la consultoría McKinsey. McKinsey fue acusada por Greenpeace de engañar sistemáticamente a los Gobiernos que eran parte de sus clientes, en su asesoramiento sobre la estrategia de conservación claramente neoliberal "redd+" (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) a favor de las industrias maderera y minera. Greenpeace (2011) argumentó que

"la asesoría de Mckinsey no conduce, en ningún caso estudiado por Greenpeace, al cese de la deforestación o la degradación forestal" y que "McKinsey —y su curva de costos— resta importancia sistemáticamente al impacto ambiental de la tala industrial y la deforestación para el establecimiento de plantaciones. Al mismo tiempo, exagera habitualmente sobre el impacto destructivo de los pequeños propietarios y agricultores". La respuesta de la empresa fue publicada en la revista neoliberal de noticias por internet *Business Green*:

> Sin embargo, McKinsey dijo que Greenpeace había malinterpretado su trabajo. La empresa se negó a responder preguntas específicas de *Business Green* sobre su metodología, pero en una declaración por correo electrónico, indicó: "No estamos de acuerdo con los hallazgos del reporte y defendemos firmemente nuestro trabajo y enfoque" (en Shankleman, 2011).

Las voces discrepantes se niegan o se presentan bajo una mirada particular. Lo que hace que este ejemplo sea aún más penoso es que esta noticia procede de un sitio en línea que se describe a sí mismo de la siguiente manera: "Business Green es un sitio *web* de negocios que ofrece a las empresas las últimas noticias y consejos sobre las mejores prácticas para ser más responsables con el ambiente, al tiempo que aumentan sus beneficios".[23] Obviamente, existen muchos otros medios en los que se escuchan o se difunden las voces discrepantes, pero en general son más bien marginales y a menudo se enfrentan a la fuerza disciplinaria de la negación o el desprecio.

Mediante estas estrategias de depuración, se mantienen los principios básicos de un sistema de explotación, mercantilización y privatización de los recursos. Funcionan además para sostener el rechazo a prácticas de valoración y formas organizativas alternativas, en particular las orientadas a lo común, la distribución recíproca mediante el intercambio multidireccional y las concepciones animistas de un mundo sensible y comunicativo a través de diversas perspectivas encarnadas. Estos esfuerzos por mantener la pureza hegemónica demuestran precisamente el funcionamiento ideológico de la conservación neoliberal (cf. Corson, 2010). Como escribe Gramsci (1971), es por medio de estas luchas que el consenso hegemónico en apariencia civil se revela como

23 http://www.businessgreen.com/about.

la imposición estructural de determinados intereses de poder de las elites. El sometimiento y el bloqueo de la disidencia que traspasa el barniz de la conservación neoliberal es precisamente lo que revela su estructura ideológica dominante (cf. Sullivan *et al*., Spicer y Böhm 2001).

Conclusión

En este artículo hemos intentado llegar a una crítica sintetizada de la conservación neoliberal. Esperamos haber delineado la conservación neoliberal como inherente al capitalismo más amplio., así como a una serie de gubernamentalidades particulares que buscan extender y vigilar procesos de mercantilización basados en la separación artificial y arbitraria de la sociedad humana y naturalezas ricas en biodiversidad (no humanas). Al producir territorios aptos para su propia expansión, la conservación neoliberal afecta diversos sistemas bioculturales alrededor del mundo, desplazándolos, cercándolos, mercantilizándolos y convirtiéndolos en naturalezas espectaculares e idealizadas que hay que salvar. Por ende, en la conservación neoliberal, diversos actores globales producen mercancías lucrativas que proliferan y dependen de ideologías y prácticas muy similares, cuyas premisas se basan en distinciones construidas entre las naturalezas humanas y no humanas, mientras que, irónicamente, les prometen lo opuesto a los consumidores (por lo regular no locales) al ofrecerles un contacto más cercano e íntimo con la naturaleza.

Como lo ha desarrollado Bruno Latour en su trabajo reciente (2004; 2005; 2010), lo que aquí nos concierne son tipos de socionaturalezas —ensamblajes de naturalezas humanas y no humanas— que se componen y surgen (cf. Deleuze y Guattari (1987) y De Landa (2006). Nos interesa lo que estas tienden a incluir y aumentar, y también a degradar y descartar. A pesar del entusiasmo generador y creativo de las formas de producción del capitalismo (como se ha señalado antes), sostenemos que se mantienen la alineación y la degradación socioecológica significativa. Las naturalezas no humanas tienden a ser simplificadas y convertidas en objetos abstractos, convenientemente silenciosos e inanimados, preparados para transformarse en mercancías al servicio de la producción de valor capitalista. Esto

amplía la utilidad de la construcción de una naturaleza pasiva como un objeto (de muchos objetos) externo y distante en relación con la presencia y los usos humanos. Asimismo, los conocimientos y las prácticas de valoración de diversos pueblos son desplazados con frecuencia para dar paso a la apertura neoliberal y a la asignación de precios a la tierra y a los "recursos", que se reconfiguran al servicio del neoliberalismo mediante la conservación. Los pueblos afectados se ven obligados a participar en las iniciativas neoliberales de conservación y a beneficiarse de ellas a medida que aceptan las oportunidades y compensaciones económicas derivadas. El carácter hegemónico de esta reducción de las posibilidades se percibe tanto en la (auto)disciplina biopolítica que exige la participación en estos contextos neoliberales (Norgaard, 2010) como en la eliminación de formas alternativas de valoración. Sostenemos y esperamos, por tanto, que esta sea un área de cambio para efectuar la transición a un mundo, que, como lo expresaron Adams y Jenarenaus (2008), sea a la vez humano y diverso. Ofrecemos esta crítica elaborada como un gesto para afirmar que ese cambio requiere una comprensión matizada del contexto y las suposiciones que están generando problemas. Como T. J. Laughlin señaló (1892), en el artículo introductorio del *Journal of Political Economy:*

> Se torna muy claro que la posibilidad de un cambio implica el conocimiento de la cosa que se pretende cambiar; que el conocimiento del sistema económico existente es una condición que precede cualquier reforma ética. Ciertas personas impacientes encuentran difícil esperar para adquirir el conocimiento sobre lo que es; y, sin preparación, proceden apresuradamente a decir lo que debería ser.

Cualquier alternativa que pueda transformar los problemas socioambientales sistémicos debe necesariamente ser mediada por la economía política de la que ha surgido, y no está sujeta a soluciones rápidas en los contextos estructurales que generan esos problemas en apariencia estructurales. Esperamos con este artículo haber delineado algunas de las razones que explican por qué la ampliación de las estructuras de la economía política que ha producido estos problemas sistémicos no podría ser, de hecho, la manera más lógica de resolver esos mismos problemas. También es-

peramos haber señalado algunas de las razones ideológicas que hacen a la conservación neoliberal de la naturaleza tan opaca y seductora para quienes se involucran en la conservación.

Al pensar en caminos futuros, nos inspira el reciente "Manifiesto composicionista" de Latour, donde propone el concepto de "composición" para representar la posibilidad de reconsiderar la crítica y darle usos creativos. Siguiendo la metáfora de Latour (2010), la crítica se puede forjar como un mazo, que puede "derrumbar muros, destruir ídolos, ridiculizar prejuicios". Hemos intentado lograr todas estas cosas, esperamos que con algo de éxito. Pero el espacio que hemos abierto en este proceso está impregnado por los restos de estas cosas. Como trozos de concreto y yeso roto en el suelo, y polvo en el aire, todo esto hace que sea un espacio difícil de habitar. ¿Cómo podemos limpiar el aire y reciclar este escombro? ¿Cómo podemos reciclar también las herramientas de la crítica, como propone Latour, en algo que pueda "reparar, cuidar, ensamblarse, reensamblarse y entretejerse?". En otras palabras, ¿cómo podríamos componer composiciones más equitativas y sanas ecológicamente de naturaleza(s) humanas y más-que-humanas en un mundo caracterizado por Latour (2010: 485) como "sin futuro, pero con muchas perspectivas"?

Las estrategias para estos fines tendrán que tejer vínculos más efectivos entre la producción teórica en la academia, los movimientos sociales (locales) que se oponen a la conservación neoliberal y toda la diversidad de iniciativas humanas para animar la socionaturaleza. Como mencionamos arriba, el trabajo académico ya ha ofrecido varios ejemplos de contextos donde un entendimiento alternativo de los enredos entre lo humano y lo no humano, han formulado críticas hacia las prácticas de conservación dominantes, aportando soluciones híbridas que incorporan conocimiento científico ecológico sólido (Neves, 2006). Si bien en sí mismos estos procesos están con frecuencia cargados de sus propias tensiones y contradicciones, también pueden develar esfuerzos exitosos para reintegrar a la práctica de la conservación preocupaciones sociales y ecológicas (locales) y formas de imaginar e interactuar con la naturaleza. Asimismo, sostenemos que las tensiones y contradicciones al final son más tolerables, productivas o incluso creativas y vigorizantes si nos acercan o contribuyen a fines que

son humanos, diversos, comunes y que ofrecen esperanza y aliento, a diferencia de fines que externos, privatizadores, divisorios y apocalípticos. Este es también el mensaje de la "producción de la naturaleza" de Niel Smith (1996: 50) que "se enfoca en las políticas de la naturaleza en torno a la pregunta de cómo y para qué fines se pueden producir las naturalezas alternativas". El pesimismo da lugar a la esperanza cuando nos preguntamos "¿qué tipo de naturaleza queremos?" en vez de "¿cuál es el precio de la naturaleza?". Son estas las preguntas que cambian los términos del debate y contribuyen a "reciclar la crítica" a fin de enmendar y reanimar las relaciones sociedad-naturaleza.

Referencias

Adams, B. y S. Jeanrenaud. (2008). *Transition to sustainability: towards a humane and diverse world*. iucn.

Adams, W. (2008). Conservation, carbon and transition to sustainability. *Oryx*, *42*(4), 469-470.

Adams, W. y J. Hutton. (2007). People, parks and poverty: political ecology and biodiversity conservation. *Conservation and Society*, *5*(2), 147-183.

Agrawal, A. y K. Redford. (2009). Conservation and displacement: an overview. *Conservation and Society*, *7*(1), 1-10.

Angelis, M. (2007). *The beginning of history: value struggles and the politics of capital*. Pluto Press.

Arsel, M. y B. Büscher. (2012). NatureTM Inc: changes and continuities in neoliberal conservation and environmental markets. *Development and Change*, *43*(1), 53-78.

Bakker, K. (2010). Debating green neoliberalism: the limits of 'neoliberal natures' *Progress in Human Geography*, *34*(6), 715-735.

Baudrillard, J. (1981). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.

Berkes, F. (1999). *Sacred ecology: traditional ecological knowledge and resource management*. Taylor & Francis.

Bernstein, H. y P. Woodhouse. (2001). Telling environmental change like it is? Reflections on a study in Sub-Saharan Africa. *Journal of Agrarian Change*, *1*(2), 283-324.

Bird-David, N. (1992). Beyond "the original affluent society": a culturalist reformulation. *Current Anthropology*, *33*(1), 25-47.

Briggs, B., D. Hill y R. Gilliespie. (2009). Habitat banking how it could work in the uk. *Journal for Nature Conservation*, *17*(2), 112-122.

Brockington, D. (2002). *Fortress conservation: the preservation of the Mkomazi Game Reserve, Tanzania*. James Currey.

Brockington, D. (2009). *Celebrity and the environment: fame, wealth and power in conservation*. Zed Books.

Brockington, D. y J. Igoe. (2006). Eviction for conservation: a global overview. *Conservation and Society*, *4*(3), 424-470.

Brockington, D., R. Duffy y J. Igoe. (2008). *Nature unbound: conservation, capitalism, and the future of protected areas*. Earthscan.

Brockington, D. y R. Duffy. (2010). Capitalism and conservation: the production and reproduction of biodiversity conservation. *Antipode*, *42*(3), 469-482.

Brockington, D. y K. Scholfield. (2010). The work of conservation organizations in Sub-Saharan Africa. *Journal of Modern African Studies*, *48*(1), 1-33.

Burkett, P. (2006). *Marxism and ecological economics: towards a red and green political economy*. Haymarket Books.

Büscher, B. (2008). Conservation, neoliberalism and social science: a critical reflection on the scb 2007 Annual Meeting, South Africa. *Conservation Biology*, *22*(2), 229-231.

Büscher, B. (2010a). Seeking telos in the 'transfrontier': neoliberalism and the transcending of community conservation in Southern Africa. *Environment and Planning A*, *42*(3), 644 660.

Büscher, B. (2010b). Derivative nature: interrogating the value of conservation in 'boundless' Southern Africa. *Third World Quarterly*, *31*(2), 259-276.

Büscher, B. (2010c). Anti-politics as political strategy: neoliberalism and transfrontier conservation in Southern Africa. *Development and Change*, *41*(1), 29-51.

Büscher, B. (2012). Payments for ecosystem services as neoliberal conservation: (reinterpreting) evidence from the Maloti-Drakensberg, South Africa. *Conservation and Society*, *10*(1), 29-41.

Caldecott, B. e I. Dickie. (2011). *Habitat banking: scaling up private investment in the protection and restoration of our natural world. Report of Climate Change Capital and eftec*. Briggs.

Castree, N. (2007). Neoliberal ecologies. En N. Heynen, S. Prudham, J. McCarthy y P. Robbins (eds.), *Neoliberal environments: false promises and unnatural consequences* (pp. 281-286). Routledge.

Castree, N. (2008a) Neoliberalizing nature: the logics of deregulation and reregulation. *Environment and Planning A*, *40*(1), 131-152.

Castree, N. (2008b). Neoliberalizing nature: processes, effects, and evaluations. *Environment and Planning A*, *40*(1), 153-173.

Chan, K., R. Pringle, J. Ranganathan, C. Briggs, Y. Chan, R. Ehrlich, P. Haff, N. Heller, K. Al-Krafaji y D. Macmynowski. (2007). When agendas collide: human welfare and biological conservation. *Conservation Biology*, *21*(1), 59-68.

Child, M. (2009). The Thoreau ideal as a unifying thread in the conservation movement. *Conservation Biology*, *23*(1), 241-243.

Corson, C. (2010). Shifting environmental governance in a neoliberal world: usaid for conservation. *Antipode*, *42*(3), 576-602.

Curry, P. (2008). Nature post-nature. *New Formations*, *26*(primavera), 51-64.

Debord, G. (1992). *Society of the spectacle*. Rebel Press.

De Landa, M. (2006). *A new philosophy of society: assemblage theory and social complexity*. Continuum.

Deleuze, G. y F. Guattari. (1987). *A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia*. The Athlone Press.

Dowie, M. (1995). *Losing ground: American environmentalism at the close of the twentieth century*. mit Press.

Dowie, M. (2006). Conservation refugees: when protecting nature means kicking people out. *Seedling*, *1*, 6-12.

Dowie, M. (2009). *Conservation refugees: the hundred-year conflict between global conservation and native peoples*. mit Press.

Dressler, W. (2011). First to third nature: the rise of capitalist conservation on Palawan Island, The Philippines. *Journal of Peasant Studies*, *38*(3), 533-557.

Dressler, W. y B. Büscher. (2008). Market triumphalism and the so-called cbnrm 'crisis' at the South African Section of the Great Limpopo Transfrontier Park. *Geoforum*, *39*(1), 452 465.

Dressler, W, B. Büscher, M. Schoon, D. Brockington, T. Hayes, C. Kull, J. McCarthy y K. Streshta. (2010). From hope to crisis and back? A critical history of the global cbnrm narrative. *Environmental Conservation*, *37*(1), 5-15.

Duffy, R. (2006). Global environmental governance and the politics of ecotourism in Madagascar. *Journal of Ecotourism*, *5*(1-2), 128-144.

Duffy, R. (2010). *Nature crime: how we're getting conservation wrong*. Yale University Press.

Ehrenfeld, D. (2008). Neoliberalization of conservation. *Conservation Biology*, *22*(5), 1091-1092.

Fairhead, J. y M. Leach (eds.). (1996). *Misreading the African landscape: society and ecology in a forest-savanna mosaic*. Cambridge University Press.

Ferguson, J. (1994). *Anti-politics machine: development, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. University of Minnesota Press.

Ferguson, J. (2010). The uses of neoliberalism. *Antipode*, *41*(S1), 166-184.

Fine, B. (2009). Development as zombie economics in the age of neoliberalism. *Third World Quarterly*, *30*(5), 885-904.

Fletcher, R. (2010). Neoliberal environmentality: towards a poststructural political ecology of the conservation debate. *Conservation and Society*, *8*(3), 171.

Foster, J. B. (1999). *The vulnerable planet: a short history of the environment*. Monthly Review Press.

Foster, J. B. (2002). *Marx's ecology: materialism and nature*. Monthly Review Press.

Foucault, M. (2008). *The birth of biopolitics: lectures at the College de France 1978-1979.* (G. Burchell, trad.). Picador.

Garland, E. (2008). The elephant in the room: confronting the colonial character of wildlife conservation in Africa. *African Studies Review*, *51*(3), 51-74.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

Goldman, R. y S. Papson. (2006). Capital's brandscapes. *Journal of Consumer Culture*, *6*(3), 327-353.

Graeber, D. (2000). Give it away. *In These Times*. 21 de agosto, 28-30. http://www.inthesetimes.com/ issue/24/19/graeber2419.html

Graeber, D. (2001). *Towards an anthropological theory of value: the false coin of our own dreams*. Palgrave Macmillan.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. Lawrence and Wishart.

Greenpeace. (2011). *Bad influence: how McKinsey-inspired plans lead to rainforest destruction*. Greenpeace International.

Gudeman, S. (2001). *The anthropology of economy: community, market, and culture*. Blackwell.

Hajer, M. (1995). *The politics of environmental discourse: ecological modernization and the policy process*. Oxford University Press.

Harper, J. (2007). *Endangered species: health, illness, and death among Madagascar's people of the forest.* Carolina Academic Press.

Harper, J. (2008). The environment of environmentalism: turning the ethnographic lens on a conservation project. En J. C. Kaufmann (ed.), *Greening the great red island: Madagascar in nature and culture* (241-274). Africa Institute of South Africa.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.

Heynen, N. y P. Robbins. (2005). The neoliberalization of nature: governance, privatization, enclosure, and valuation. *Capitalism Nature Socialism*, *16*(1), 5-8.

Heynen, N., S. Prudham, J. McCarthy y P. Robbins (eds.). (2007). *Neoliberal environments: false promises and unnatural consequences*. Routledge.

Igoe, J. (2010). The spectacle of nature and the global economy of appearances: anthropological engagements with the images of transnational conservation. *Critique of Anthropology*, *30*(4), 375-397.

Igoe, J. y S. Sullivan. (2009). *Problematizing neoliberal biodiversity conservation: displaced and disobedient knowledge*. International Institute for Environment and Development.

Igoe, J. K. Neves y D. Brockington. (2010). A spectacular eco-tour around the historic bloc: theorizing the convergence of biodiversity conservation and capitalist expansion. *Antipode*, *42*(3), 586-512.

Igoe, J. y D. Brockington. (2007). Neoliberal conservation: a brief introduction. *Conservation and Society*, *5*(4), 432 449.

Kovel, J. (2002). *The enemy of nature: the end of capitalism, or the end of the world?* Zed Books.

Larner, W. (2000). Theorizing neoliberalism: policy, ideology, governmentality. *Studies in Political Economy*, *63*, 5-26.

Latour, B. (2004). *Politics of nature: how to bring the sciences into democracy*. Harvard University Press.

Latour, B. (2005). *Reassembling the social: an introduction to actor-network theory*. Oxford University Press.

Latour, B. (2010). An attempt at a "compositionist manifesto". *New Literary History*, *41*(3), 471-490.

Laughling, T. J. (1892). The study of political economy in the United States. *The Journal of Political Economy*, *1*(1), 13.

Leach, M. y R. Mearns. (1996). *The lie of the land: challenging received wisdom on the African environment*. James Currey.

Le Que're', C. *et al*. (2009). Trends in the sources and sinks of carbon dioxide. *Nature Geoscience*, *2*, 831-836.

McAfee, K. (1999). Selling nature to save it? Biodiversity and green developmentalism. *Society and Space*, *17*(2), 203-219.

McAfee, K. (2003). Neoliberalism on the molecular scale: economic and genetic reductionism in biotechnology battles. *Geoforum*, *34*(2), 203-219.

MacDonald, C. (2008). *Green, Inc.: an environmental insider reveals how a good cause has gone bad*. Lyons Press.

MacDonald, K. (2010a). The devil is in the (bio)diversity: private sector 'engagement' and the restructuring of biodiversity conservation. *Antipode*, *42*(3), 513-550.

MacDonald, K. (2010b). Business, biodiversity and new "fields" of conservation: the world conservation congress and the renegotiation of organizational order. *Conservation and Society*, *8*(4), 256-275.

Mandel, J., J. Donlan y J. Armstrong. (2010). A derivative approach to endangered species conservation. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *8*(1), 44 49.

Marx, K. 1976. *Capital. Volume 1*. Penguin.

McCarthy, J. y S. Prudham. (2004). Neoliberal nature and the nature of neoliberalism. *Geoforum*, *35*(3), 275-283.

McQueen, H. (2003). *The essence of capitalism: the origins of our future*. Black Rose.

Moore, J. (2010). The end of the road? Agricultural revolutions in the capitalist world-ecology, 1450-2010. *Journal of Agrarian Change*, *10*(3), 389-413.

Mosse, D. (2005). *Cultivating development: an ethnography of aid policy and practice*. Pluto Press.

Muradian, R., E. Corbera, U. Pascual, N. Kosoy y P. May. (2010). Reconciling theory and practice: an alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services. *Ecological Economics*, *69*(6), 1201-1208.

Nally, D. (2011). The biopolitics of food provisioning. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *36*(1), 37-53.

Neves, K. (2006). Politics of environmentalism and ecological knowledge at the intersection of local and global processes. *Journal of Ecological Anthropology*, *10*, 19-32.

Norgaard, R. (2010). Ecosystem services: from eye-opening metaphor to complexity blinder. *Ecological Economics*, *69*(6), 1219-1227.

Nygeres, A. y G. Green. (2000). The ethnography of landscape: gis and remote sensing in the study of forest change in West African Guinea savanna. *American Anthropologist*, *102*(2), 271-289.

O'Connor, J. (1998). *Natural causes: essays in ecological marxism*. Guilford.

O'Connor, M. (2004). On the misadventures of capitalist nature. En M. O'Connor (ed.), *Is capitalism sustainable? Political economy and the politics of ecology* (pp. 125-151). Guildford.

Paudel, N., S. Ghimire y H. Ojha. (2007). Human rights: a guiding principle or an obstacle for conservation? *Policy Matters*, *15*, 299-310.

Peterson, M., D. Hall, A. Feldpausch-Parker y T. Peterson. (2009). Obscuring ecosystem function with application of the ecosystem services concept. *Conservation Biology*, *24*(1), 113-119.

Plumwood, V. (2006). The concept of a cultural landscape: nature, culture and agency in the land. *Ethics and the Environment*, *11*(2), 115-150.

Posey, D. (2004). *Indigenous knowledge and ethics: a Darrell Posey reader.* Routledge.

Prudham, S. (2007). The fictions of autonomous intervention: accumulation by dispossession, commodification and life patents in Canada. *Antipode*, *39*(3), 406-429.

Redclift, M. (1988). Sustainable development and the market: a framework for analysis. *Futures*, *20*(6), 635-650.

Redford, K. y W. Adams. (2009). Payment for ecosystem services and the challenge of saving nature. *Conservation Biology*, *23*(4), 785-787.

Robertson, M. (2004). The neoliberalization of ecosystem services: wetland mitigation banking and problems in environmental governance. *Geoforum*, *35*(3), 361-373.

Robertson, M. (2008). Evaluation of a market in wetland credits: entrepreneurial wetland banking in Chicago. *Conservation Biology*, *22*(3), 636-646.

Roth, R. y W. Dressler. (2012). Market-oriented conservation governance. The particularities of place. *Geoforum*, *43*(3), 363-366.

Saad-Filho, A. y D. Johnston (eds.). (2005). *Neoliberalism: a critical reader.* Pluto Press.

Salafsky, N., R. Margoluis, K. Redford y J. Robinson. (2002). Improving the practice of conservation: a conceptual framework and research agenda for conservation science. *Conservation Biology*, *16*(6), 1469-1479.

Shankleman, J. (2011). McKinsey accused of driving deforestation with poor redd advice. *BusinessGreen*. 7 de abril. http://www.businessgreen.com/bg/news/2041685/mckinsey-accuseddriving-deforestation-poor-redd-advice

Simon, H. (ed.). (2008). *Economics, bounded rationality and the cognitive revolution*. Edward Elgar Publishing.

Sklair, L. (2001). *The transnational capitalist class*. Blackwell.

Smith, N. (1996). The production of nature. En G. Robertson, M. Mash, L. Tickner, J. Bird, B. Curtis y T. Putnam (eds.), *Future natural: nature, science, culture* (pp. 35-54). Routledge.

Stahel, A. (1999). Time contradicts capitalism. *Capitalism Nature Socialism*, *10*(1). http:// www.centerforpoliticalecology.org/Cyberbooks/part10.html

Stott, P. y S. Sullivan, eds. 2000. Political ecology: Science, myth and power. London: Edward Arnold.

Sullivan, S. (2003). Protest, conflict and litigation: dissent or libel in resistance to a conservancy in North-West Namibia. En E. Berglund y D. Anderson (eds.), *Ethnographies of conservation: environmentalism and the distribution of privilege* (pp. 69-86). Berghahn Press.

Sullivan, S. (2005). Reflections on 'new' (neoliberal) conservation (with case material from Namibia, Southern Africa). *Africa e Orienti*, *2*, 102-115.

Sullivan, S. (2006). The elephant in the room? Problematizing 'new' (neoliberal) biodiversity conservation. *Forum for Development Studies*, *33*(1), 105-135.

Sullivan, S. (2009). Green capitalism and the cultural poverty of constructing nature as a service-provider. *Radical Anthropology*, *3*, 18-27.

Sullivan, S. (2010). "Ecosystem service commodities" a new imperial ecology? Implications for animist imminent ecologies, with Deleuze and Guattari. *New Formations: A Journal of Culture/Theory/Politics*, *69*, 111-128.

Sullivan, S. (2011). Conservation is sexy! What makes this so, and what does this make? An engagement with "celebrity and the environment". *Conservation and Society*, *9*(3), 102-113.

Sullivan, S. (2013). Banking nature? The spectacular financialization of environmental conservation. *Antipode*, *45*(1), 198-217.

Sullivan, S., A. Spicer y S. Bohm. (2011). Becoming global (un)civil society: counter-hegemonic struggle and the Indymedia network. *Globalizations*, *8*(5), 703-717.

Thrift, N. (2005). *Knowing capitalism*. Sage.

Vira, B. y W. Adams. (2009). Ecosystem services and conservation strategy: beware the silver bullet. *Conservation Letters*, *2*(4), 158-162.

Viveiros de Castro, E. (2004). Exchanging perspectives: the transformation of objects into subjects in Amerindian ontologies. *Common Knowledge*, *10*(3), 463-484.

Walker, S., A. Brower, T. Stephens y W. Lee. (2009). Why bartering biodiversity fails. *Conservation Letters*, *2*(4), 149-157.

West, P. y J. Carrier. (2004). Ecotourism and authenticity: getting away from it all? *Current Anthropology*, *45*(4), 483-498.

F3. EXTRACTIVISMOS

38. Empresas mineras, comunidades indígenas y estado: la ecología política del litio en Chile (Salar de Atacama) y Argentina (Salar de Olaroz-Cuachari)

Hans Gundermann y Felix Malte Dorn [1]

Resumen: Basándose en una investigación de campo intensiva y de largo plazo, así como revisión de documentos, este artículo compara la evolución histórica de la minería del litio en Chile y Argentina. Destacamos los discursos nacionales de desarrollo y los marcos normativos gubernamentales en ambos países. Ilustramos y evaluamos las diversas percepciones y estrategias de los actores locales. Por último, discutimos la materialización socioespacial de la minería del litio en términos de relaciones de poder, ecología y economía. El uso de las perspectivas de la ecología política saca a la luz las diferentes relaciones de poder entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades indígenas de Chile y Argentina. Estas asimetrías de poder tienen una influencia duradera en las posibilidades de acción de los actores locales.

Palabras clave: minería del litio, Argentina, Chile, ecología política, relaciones de poder.

---

1 Publicado en: Felix Malte Dorn y Hans Gundermann, 2022, "Mining companies, indigenous communities, and the state: the political ecology of lithium in Chile (Salar de Atacama) y Argentina (Salar de Olaroz-Cauchari)", *Journal of Political Ecology*, 29(1): 341-359.

Dr. Felix Malte Dorn, Departamento de Estudios del Desarrollo, Universidad de Viena, Austria. Correo: felix.dorn@univie.ac.at; Felix Dorn agradece al programa de financiación Disruptive Innovation - Early Career Seed Money de la Academia Austriaca de Ciencias (ÖAW) y al Fondo Austriaco para la Ciencia (FWF).

Dr. Hans Gundermann, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM), San Pedro de Atacama, Universidad Católica del Norte, Chile. Correo electrónico: hgunder@ucn.cl.

Introducción

Durante las tres últimas décadas, el interés económico por el litio se ha disparado debido a la creciente importancia del mineral para las innovaciones tecnológicas que forman parte de los estilos de vida sostenibles y las bajas emisiones de dióxido de carbono. Debido a su bajo peso, el mineral desempeña un papel esencial en la producción de baterías de iones de litio de alto rendimiento. Especialmente en el Norte Global y en China, la electromovilidad se ha convertido en un símbolo de esperanza para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el creciente sector del transporte mundial.

Estas tendencias han suscitado un renovado interés en los mayores depósitos de litio del mundo en el triángulo del litio, que comprende partes de Bolivia, Chile y Argentina. Esta región contiene más de la mitad de los recursos mundiales de litio y más de 80% de las reservas de salmueras de litio (USGS, 2020). Esta extensa región ya contaba con una historia de explotación minera de salares, pero solo recientemente se ha focalizado en el litio a escala industrial. Esta tendencia comenzó en 1984 en Chile, en el Salar de Atacama, con la empresa Sociedad Chilena del Litio (SCL), y se amplió a finales de la década de los noventa con la Sociedad Química y Minería (SQM). En Argentina, la explotación del litio comenzó en 1997 en el Salar del Hombre Muerto, con el proyecto Fénix, de la empresa Food Machinery Corporation (fmc). En 2014, la empresa Sales de Jujuy ha puesto en marcha el proyecto Olaroz para explotar el Salar de Olaroz-Cauchari, lo que ha incrementado rápidamente la producción argentina. En Bolivia, la extracción nacionalizada y la industrialización avanzan de forma muy lenta. En la actualidad, existen plantas piloto de cloruro potásico y carbonato de litio, así como avances más sustanciales en la producción de cátodos de iones de litio (Obaya, 2019). Argentina y Chile representan ya más de 80% de la producción y exportación mundial de litio (Argento y Zícari, 2017; Dorn, 2021a).

El litio se considera un mineral esencial para la transición hacia la sostenibilidad debido a la expansión de los proyectos mineros, las comunidades atacameñas de San Pedro de Atacama en Chile y del departamento de

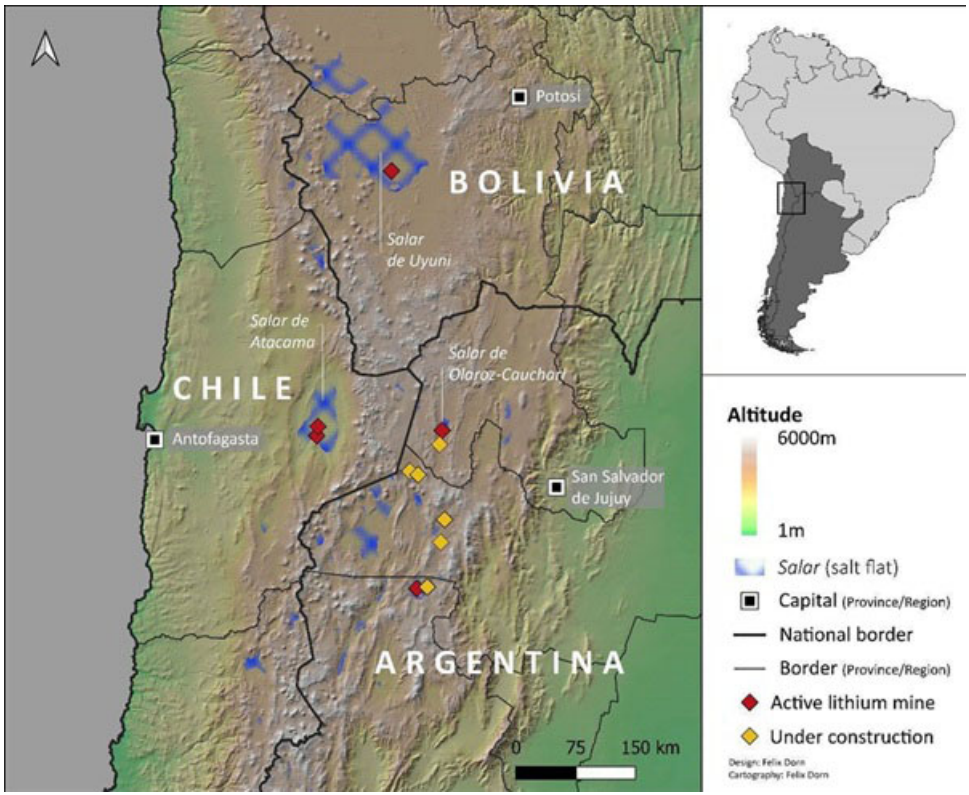
Susques en Argentina se encuentran de pronto en el centro de procesos económicos mundiales. Etiquetas como "oro blanco" o "nuevo petróleo" no solo han alimentado los discursos nacionales sobre el desarrollo, sino que también circulan en las localidades. Sin embargo, la minería de salares acarrea amenazas sociales y ambientales, y tiene consecuencias ambiguas en las comunidades indígenas cercanas. Por tanto, exploramos la cuestión de si la minería del litio perpetúa y exacerba las desigualdades Norte-Sur existentes en nombre de la transición hacia la sostenibilidad. Para ello, nos aproximamos al tema desde la perspectiva de la ecología política. Esto nos permite identificar las transformaciones socioterritoriales provocadas por la minería del salar en el Salar de Atacama y en el Salar de Olaroz-Cauchari, registrar las diferencias y similitudes entre ambos casos y determinar sus causas. Para nuestra comparación, nos centramos en los entornos institucionales, los distintos actores, las relaciones de poder subyacentes y los conflictos socioecológicos resultantes. Identificamos importantes desequilibrios de poder entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades indígenas, pronunciados de manera particular en Argentina. En vista de ello, tratamos de aclarar la paradoja de la minería de salares y de la minería del litio en particular, y cómo los impactos locales contradicen las pretensiones de sostenibilidad de la economía verde mundial. Este artículo forma parte de un amplio debate interdisciplinar sobre los efectos socioecológicos de la "megaminería" a gran escala (Bebbington *et al*., 2008; Dorn y Ruiz, 2020; Svampa, 2008, 2019; Walter y Wagner, 2021). Nuestro interés se dirige a analizar los nuevos conflictos socioambientales en el contexto de la "transición hacia la sostenibilidad".

Los siguientes análisis de la minería de salares en Chile y Argentina se basan en un extenso trabajo de campo e investigación documental que se nutre de informes oficiales, información de instituciones gubernamentales (el Servicio de Evaluación Ambiental en Chile y la Secretaría de Minería e Hidrocarburos en Argentina), registros de prensa y sitios *web*, y documentación de organizaciones indígenas. En Chile, la investigación de campo se llevó a cabo de forma intermitente a partir de 2012. En el caso argentino, se basa en diez meses de trabajo de campo etnográfico realizado entre febrero de 2018 y agosto de 2019. Los métodos aplicados incluyen investigación

social cualitativa con observaciones, mapeo participativo y entrevistas con diferentes actores (n=109), así como un extenso cuestionario.

Comenzamos el artículo con una revisión de la historia de la minería del litio, los discursos nacionales sobre el desarrollo y las normativas de los dos países. A continuación, analizamos las percepciones locales de la minería del salar y comparamos las acciones y estrategias de los actores locales. Por último, discutimos la materialización socioespacial de la minería del salar a la luz de las cuestiones económicas y ecológicas, así como las relaciones de poder entre los actores.

Mapa 1. Proyectos mineros de litio en Chile, Argentina y Bolivia



Fuente: Felix Dorn.

El papel del Estado respecto a un recurso estratégico

Chile: un Estado centralizado

La minería de sales y su extracción (por ejemplo, para obtener salitre y yodo) es un capítulo importante de la historia social del norte de Chile (Chong *et al*., 2000). La configuración urbana, los flujos de población, las infraestructuras de transporte y los puertos de esta región solo pueden entenderse en relación con los ciclos y crisis de la minería y la exportación de cobre y sales (Geisse, 1983).

A principios de la década de los sesenta, la empresa estadounidense Anaconda Copper Company, que controlaba la mina de cobre de Chuquicamata, emprendió exploraciones en busca de agua en el Salar de Atacama, donde les llamó la atención el sustrato salino del salar. A finales de la década, el Gobierno chileno encargó al Instituto de Investigaciones Geológicas la realización de nuevos estudios (Moraga *et al*., 1974). En 1974, se creó el Programa de Sales Mixtas dentro de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que en 1977 se convirtió en el Comité de Sales Mixtas (csm). El potencial del salar llamó la atención de Foote Minerals, una empresa estadounidense con experiencia en la explotación de salares en Clayton Valley, Silver Peak, Nevada. En 1975, Foote llegó a un acuerdo con el Gobierno chileno e hizo su propia exploración, que confirmó la calidad de la salmuera y las excelentes condiciones mineras. En 1977, Corfo estableció 59 820 propiedades mineras,[2] y posteriormente descartó parte de ellas para dejar el número actual de 32 768. También en 1977, la Corporación del Cobre (Codelco), que controla las minas de cobre estatales de Chile, obtuvo permisos en el Salar de Pedernales y registró otros en Maricunga. Esto allanó el camino para su actual incursión en la minería de salares. Al mismo tiempo, el Decreto Ley 2886 de 1979 reforzó la definición del litio como recurso nacional y puso de relieve la alineación de Chile con la política estadounidense de la Guerra Fría sobre posibles recursos nucleares. La extracción de litio quedó excluida desde las propiedades mineras existentes.

2 Según la legislación chilena, una propiedad o licencia minera puede ser de exploración o de explotación. Una precede a la otra. La titularidad de la propiedad o concesión es indefinida mientras se realicen los pagos exigidos por la legislación y los reglamentos.

Esto no afectó a los permisos mineros en los salares ni a las propiedades mineras con sal económicamente viables, pero sí a la explotación del litio.[3]

En 1980 se creó la Sociedad Chilena del Litio (scl) para explotar el Salar de Atacama. Corfo aportó a las concesiones mineras, y Cyprus Foote el capital y la tecnología para extraer carbonato de la salmuera de litio. Las condiciones eran favorables para Foote: nada de regalías, ocho años de exclusividad y una cuota del equivalente a 200 000 toneladas de litio para extraer en treinta años. En 1984 comenzó la extracción de carbonato de litio. En 1988 y 1989, Corfo vendió su participación a Cyprus Foote, con lo que ésta pasó a controlar la totalidad de las operaciones y concesiones. Diez años más tarde, en 1998, Cyprus Foote fue adquirida por la empresa alemana Chemetall. En 2004, el conglomerado estadounidense Rockwood adquirió Chemetall. En 2012 se creó la división Rockwood Lithium. En enero de 2015, la estadounidense Albemarle Corporation adquirió Rockwood y se hizo con el control de la empresa, los contratos y las instalaciones mineras en Chile. En combinación con la compra en 2014 de 49% de Talison Lithium, el principal productor de litio de Australia a partir de yacimientos de roca convencional, el control de Rockwood Lithium posicionó a Albemarle como uno de los principales actores mundiales en la producción y el procesamiento de litio.

Por iniciativa de Corfo, en 1983 se realizó una licitación internacional con el objetivo de extraer potasio, boro y litio. Se adjudicó a un consorcio inversor formado por la chilena Molymet, la estadounidense Amax y Corfo, del que surgió en 1986 la Sociedad Minera del Salar de Atacama (Minsal). Corfo arrendó 14.814 propiedades a Minsal y autorizó la explotación de 180 100 toneladas de litio metálico o su equivalente. sqm, empresa estatal privatizada en 1985, compró 75% de Minsal en 1993.[4] Obtuvo una ampliación a 16 384

3 Esto, en consonancia con la política minera nacional iniciada en la década de los ochenta. El Código Minero de 1982 mantuvo el principio de que los recursos mineros fueran propiedad del Estado. Al mismo tiempo, promovió un sistema de licencias que ofrecía garantías jurídicas a los titulares de estas. En un momento en que los recursos públicos y la financiación privada nacional eran limitados, esto atrajo el interés de los inversores extranjeros. Tal política es uno de los pilares neoliberales del crecimiento minero de Chile, que se produjo antes que en otros países latinoamericanos.

4 Corfo prefirió una empresa con capital de inversión nacional a las internacionales, en particular FMC (ex-LITHCO).

propiedades, un plazo de ejecución hasta 2030 y el compromiso de no explotar las 11 670 propiedades que aún mantenía Corfo. En 1995, sqm compró las adicionales que quedaban en manos de Corfo, con lo cual obtuvo la propiedad total de Minsal. En 1996, swq comenzó a extraer carbonato de litio y cloruro de potasio (Aserta Consultores, 2010; Lagos, 2012; Poveda, 2020).

A finales de la década de 2000, la proporción de Chile en la producción mundial de litio disminuyó con la aparición de la extracción de litio en Greenbushes, Australia Occidental, explotada por Talison Lithium y refinada en plantas de China. En respuesta al aumento de la demanda de baterías de litio y a la subida de los precios del mercado, se anunciaron nuevos proyectos de extracción de litio en Argentina, Australia, China y otros países, tanto de roca como de salmuera. El Gobierno chileno adoptó dos iniciativas para responder a estos desarrollos: la primera, que fracasó, se emprendió durante el gobierno conservador liderado por Piñera (2010-2014). Trató de fomentar una mayor producción de litio y potasio mediante actores privados (capital de inversión y empresas nacionales e internacionales) y con una normativa laxa. La segunda iniciativa tenía el mismo objetivo y fue exitosa. Fue la puesta en marcha de una política nacional del litio basada en una transformación política e institucional de la minería de salares, que implicó a instituciones estatales, contratos revisados, nuevos actores del mercado, investigación y desarrollo, y mejores relaciones con las comunidades locales. También creó una administración más jerarquizada y articulada para llevar a cabo la política nacional (Poveda, 2020).

A mediados de 2012, se solicitaron ofertas internacionales para un contrato especial de explotación de litio (ceol, recogido en el Decreto Ley 2886/1979), para extraer 100.000 toneladas de litio metálico, equivalentes a 532 000 toneladas de carbonato de litio. La empresa elegida tenía la responsabilidad de obtener los derechos mineros y cumplir los requisitos ambientales. Los licitadores fueron posco, de Asia; nx Uno de Peine (Samsung), con capital de Corea y Chile, y la empresa chilena sqm. La oferta de sqm, de 40.9 millones de dólares, fue declarada ganadora. Desde el principio, la iniciativa generó una activa oposición política y varias impugnaciones legales en el Congreso chileno. La licitación fue anulada por acusaciones de incumplimiento de las bases de licitación. Este fracaso devolvió las cosas al punto de partida y puso fin durante un tiempo al uso de este tipo de contratos especiales.

Con el inicio de la segunda presidencia de Bachelet en 2014, se formó la Comisión Nacional del Litio. La comisión fue encabezada por el Ministro de Minería e incluyó a expertos nacionales e internacionales, investigadores, autoridades y directores de organismos públicos. Se incluyó al presidente del Comité de Pueblos Atacameños (CPA) y a un representante de los trabajadores. El informe final de la comisión se publicó a principios de 2015. Sus recomendaciones se han convertido en la hoja de ruta de la política pública sobre el litio. Por primera vez, se logró una posición razonada y global sobre la minería en salares. A partir de 2017, las recomendaciones se pusieron cada vez más en práctica. El informe destaca la falta de control y regulación suficientes por parte del Estado. Subraya el carácter frágil, complejo y dinámico de los ecosistemas de los salares y la necesidad de un cambio paradigmático en la relación entre las empresas y las comunidades con respecto a su territorio y sus recursos hídricos. Propuso la noción de "valores compartidos". Hizo hincapié en que el Estado es propietario de los recursos naturales y reiteró el papel sustantivo del Estado en la explotación de los salares, la obtención de ingresos y la sostenibilidad ambiental. Planteó la necesidad de reforzar las instituciones públicas implicadas en la administración de los salares y propuso la formación de una empresa estatal dedicada a la explotación de los salares. Mediante la búsqueda de alianzas público-privadas, se sugirió que esta empresa se dedicara a impulsar el control estatal en todos los proyectos de salares del país.[5]

El informe sugiere medidas a corto plazo destinadas a cambiar la situación. En primer lugar, la revisión de los contratos con sqm y Albemarle otorgó al Estado un papel más activo. Se ampliaron las operaciones de estas empresas y se autorizaron otras nuevas, con la condición de que se llevaran a cabo siguiendo una nueva estructura de rentabilidad económica, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. En segundo lugar, se creó el

5 El informe destaca el carácter estratégico del litio. Mientras que en el pasado el litio se consideraba un recurso estratégico por su uso en aplicaciones nucleares, hoy lo es por sus aplicaciones energéticas. Por ello, se mantiene el estatus de mineral no licenciable. Asimismo, el informe señala el interés de promover el negocio del litio y fomentar la circulación de conocimientos, tecnologías e investigación y desarrollo.

Consejo Directivo estatal para la gestión de los salares, que incluía a corfo, el Ministerio de Minería y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entre otros. Se encargó de proponer una nueva institucionalidad gubernamental que reemplazara o confirmara al Directorio y creara una empresa minera estatal.[6] Mientras tanto, se realizaron nuevos acuerdos público-privados para la exploración y explotación del litio, por ejemplo, las explotaciones de Codelco en los salares de Maricunga y Pedernales, en la región de Atacama. Estos cambios reforzaron el papel más activo del Estado en los contratos mineros, así como la responsabilidad de los proyectos de gestión privada de cumplir los requisitos ambientales y sociales.

¿Qué ha resultado de la nueva política del litio? Recientemente, la minería del litio ha cobrado un impulso considerable. Cuatro factores principales han reconfigurado la minería del salar en Chile. En primer lugar, a principios de 2017, Corfo y Albemarle formalizaron un contrato revisado que permitía ampliar la producción de litio y extender los plazos. Albemarle está ahora autorizada a producir el equivalente a 262 132 toneladas de litio metálico (LME) hasta 2043. Su producción anual de carbonato de litio aumentó de 26 000 a 82 000 toneladas. El contrato estipula unos ingresos estatales de varios miles de millones de dólares estadounidenses durante este periodo e incluye un acuerdo novedoso, al menos con respecto a otros proyectos mineros del país, entre Albemarle y las comunidades indígenas de la cuenca del Salar de Atacama y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) (entre otros, Babidge *et al*., 2019; 743).[7]

En segundo lugar, la renegociación de sqm con Corfo atravesó un largo y difícil proceso. Desde mediados de 2014, la relación ha sido objeto de procedimientos judiciales. En sucesivas demandas, Corfo acusó a sqm de incumplimiento financiero de sus contratos, bloqueo de competidores en el Salar de Atacama y daños ambientales. Esto último tuvo una fuerte repercusión en el Congreso chileno, en la prensa nacional y las organizaciones

6 Dicha empresa se dedicaría a la explotación de las salinas, en especial del litio, y favorecería un modelo de negocio con una asociación público-privada (Comisión Nacional del Litio, 2015: 34).

7 Además de la nueva cuota de extracción de litio, los acuerdos incluyen la construcción de una planta de carbonato de litio, la opción de construir una planta de hidróxido de litio y contribuciones para investigación y desarrollo.

indígenas del Salar de Atacama. A finales de 2017, las partes anunciaron un acuerdo: un pago de una indemnización de 17.5 millones de dólares reclamada por Corfo y una prórroga de la cuota de explotación hasta 2030.[8] Esto se formalizó a principios de 2018, al final del segundo gobierno de Bachelet.[9]

Tercero, con el objetivo de operar conjuntamente proyectos mineros con empresas privadas en los salares de Maricunga y Pedernales, Codelco creó en 2017 la empresa subsidiaria Salar de Maricunga. A mediados de 2019, Codelco anunció un acuerdo con Salar Blanco Mining (MSB) para operar su filial bajo los términos de un contrato especial de ceol. Salar de Maricunga obtuvo el ceol del Ministerio de Minería en marzo de 2018, días antes que una nueva administración asumiera el poder. Suponiendo implícitamente que su rol está en la minería del cobre, pero no en la del salar, el Estado dispensó su participación directa en la minería del litio.

Por último, a pocos días de iniciado el segundo gobierno de Piñera en 2018, se autorizó a MSB para extraer litio y otras sales del salar de Maricunga. Esta empresa está controlada por la australiana Lithium Power International Ltd (51%), la minera chilena MSB y la canadiense Bearing Lithium Corporation (18%). MSB obtuvo un acuerdo ambiental favorable que incluye acuerdos con las comunidades locales. Después de MINSAL, que más tarde se convirtió en SQM, MSB es el único proyecto minero de salar en el que una empresa privada ha sido autorizada a extraer litio.

---

8 Entre otras cosas, incluye la modificación del contrato actual y un aumento de la cuota de extracción en 349 553 toneladas de lme (aproximadamente 1 860 000 toneladas de carbonato de litio). Se estipulan contribuciones para investigación y desarrollo de 10.8-18.9 millones de dólares anuales para el desarrollo de la tecnología de extracción y el uso del agua. Se dedican contribuciones de 10-15 millones de dólares anuales al desarrollo económico y cultural de la cuenca del Salar de Atacama. Además, 1.7% de las ventas totales de SQM Salar se destinará a los municipios locales. Se calcula que entre 2018 y 2030 se transferirá un total de 8 300 millones de dólares al Estado, la región y las comunidades.

9 Dado el conflicto SQM-Corfo sobre evasión de pagos, procesos sancionadores ambientales y corrupción política en las transferencias monetarias, este acuerdo de última hora fue una sorpresa. Parlamentarios, dirigentes sociales, ong, académicos y organizaciones indígenas manifestaron su oposición al acuerdo. El CPA y otras partes interesadas participaron en los procesos judiciales de anulación que se incoaron. A principios de 2019, el Tribunal Supremo chileno desestimó todas las demandas y confirmó el acuerdo.

La minería del litio en Argentina: un recurso estratégico y una materia prima

Al igual que en Chile, los debates sobre los yacimientos de litio en Argentina han ganado visibilidad en las dos últimas décadas. El descubrimiento de yacimientos en el noroeste de Argentina se remonta a casi un siglo. Entre 1923 y 1927, Luciano R. Catalano[10] realizó cinco expediciones a la Puna argentina para investigar yacimientos minerales en salares andinos de gran altitud. De inmediato reconoció el potencial de la región por la riqueza en boratos y litio. En su informe *Litio: una nueva fuente natural de energía*, describe la importancia del litio para la producción de energía, incluida la nuclear. Sugirió que Argentina utilizara esta riqueza en materias primas en beneficio nacional. Sostuvo que el Gobierno y sus militares estaban obligados a defenderlo e impedir a toda costa Su extracción y exportación al extranjero (Catalano, 1964: 19). En los años siguientes, en el Plan de Salares de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), la estrategia política para la explotación de los salares siguió en gran medida las recomendaciones de Catalano. Entre 1969 y 1974 se exploraron varios salares en Jujuy, Salta y Catamarca. El objetivo principal era lograr un suministro rentable de litio para las aleaciones de la industria aeroespacial, así como para la energía nuclear civil (Nacif, 2019; Slipak, 2015).

A partir de 1976, el Gobierno militar de Videla inició una liberalización económica fundamental. El litio se incluyó como recurso autorizable en la ley nacional de minería. En 1982, el Gobierno militar de Galtieri intentó vender el proyecto dgfm en el Salar del Hombre Muerto a Lithco,[11] pero la transacción se pospuso debido al inicio de la Guerra de las Malvinas (Nacif, 2018). En 1989, Carlos Menem fue elegido presidente de Argentina. En el marco del Consenso de Washington, consolidó la orientación neoliberal del país. Tras perder la licitación del Salar de Atacama frente

10 Catalano era doctor en Química y se especializó en Geología y Mineralogía. De 1922 a 1930 fue jefe del Departamento de Geología del Ministerio de Agricultura argentino. Bajo el gobierno de Arturo Umberto Illia (1963-1966) fue nombrado subsecretario de Estado de Minería.

11 En 1985, Lithco fue adquirida por la empresa estadounidense fmc. A principios de 2019, la división FMC Lithium se separó de fmc y pasó a llamarse Livent, que ahora cotiza de forma independiente en la Bolsa de Valores.

a sqm (véase más arriba) y fracasar en su intento de firmar un contrato con el Gobierno boliviano para explotar el Salar de Uyuni, debido a las protestas locales, Lithco volvió a centrar su atención en Argentina. En 1990, Lithco acordó un contrato con la administración de Menem para explotar el antiguo proyecto de la dgfm. Tanto la dgfm como la provincia de Catamarca recibieron una participación de 2.5% en la filial operativa, Altiplano Mining (Argento, 2018).

Durante la década de los noventa, hubo reformas legales e institucionales que fueron iniciadas y apoyadas por el Banco Mundial (Nacif, 2018). Estas reformas se dirigían en particular al sector minero. Entre los cambios de mayor alcance se encuentra la Ley de Inversiones Mineras de 1993. Garantizaba ventajas fiscales, treinta años de estabilidad fiscal y regalías máximas de 3% para las empresas explotadoras (Ley 24.196/1993). Además, el artículo 124 de la reforma constitucional de 1994 transfirió la propiedad de los recursos naturales del Estado a las provincias. En el curso de la reforma estatal de 1993, la participación de la dgfm en Altiplano Mining se transfirió a la provincia de Catamarca, con que aumentó su participación a 5%. Al año siguiente, el gobernador Arnoldo Castillo firmó un nuevo contrato con fmc para reducir la participación provincial a 3% y eximir a la empresa del pago de tasas por el uso de agua (Nacif, 2019).

Entre 1993 y 1997, Altiplano Mining construyó el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en el norte de la provincia de Catamarca. El proyecto se inauguró de manera oficial en diciembre de 2017. Produce 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y 5 000 toneladas de cloruro de litio. En el lugar se encuentra una planta de producción de carbonato de litio. Una planta de transformación de salmuera concentrada en cloruro de litio se encuentra en General Güemes, en la provincia de Salta. Las exportaciones salen del puerto chileno de Antofagasta y se envían principalmente a las plantas de la propia empresa en China y Estados Unidos.

Para Jujuy, Salta y Catamarca, tres provincias con índices de pobreza relativamente altos, esta fue una oportunidad para vender permisos, cobrar regalías y recibir inversiones extranjeras que crearan puestos de trabajo,

aportaran ingresos a las provincias y aumentaran la independencia política del Gobierno nacional. En la década de los noventa, Argentina se abrió a la globalización económica mediante la liberalización y la flexibilidad económicas. Al mismo tiempo, el papel del Estado se restringió de forma drástica mediante la desregulación. El Gobierno permitió la extracción de recursos y minerales que antes se consideraban de importancia estratégica nacional. La expansión de la extracción de litio formó parte de una tendencia más amplia en la minería de los años noventa (Dorn, 2021a; Hafner *et al*., 2016; Paolasso *et al*., 2013). Bajo los Gobiernos progresistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), la alineación del país se mantuvo sin cambios. En 2004, Argentina ocupaba el noveno puesto en la lista de países por inversión extranjera directa (Bridge, 2004). Ese mismo año, el gobierno de Kirchner lanzó un Plan Minero Nacional, que consolidó las tendencias de la década de los noventa y alentó una mayor expansión del sector minero. Así, la minería se convertiría en un pilar fundamental del futuro económico del país (Walter y Martínez-Alier, 2011).

La minería del litio en Argentina tiene un desarrollo relativamente reciente. La inauguración del proyecto Olaroz de Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz-Cauchari en 2014 convirtió al país en el cuarto productor de litio después de Australia, Chile y China, y en el segundo exportador de carbonato de litio después de Chile. Recientemente, las políticas neoliberales de Argentina han aumentado su cuota de mercado e incrementado la producción de carbonato de litio. En la actualidad, hay más de sesenta proyectos de litio en la Puna argentina en diversas fases de explotación, exploración o estudios de viabilidad. Todos los salares de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca están cubiertos de licencias mineras (Dorn, 2021a). Desde 2010, este proceso ha ido acompañado de un debate social, científico y político sobre el potencial geoestratégico y de industrialización asociado a los yacimientos de litio del país. Ha habido muchas iniciativas políticas y propuestas legislativas destinadas a reclamar una mayor participación en la cadena de valor. Este amplio debate incluye la socialización de los medios de producción y el desarrollo de la producción nacional de baterías (Nacif, 2015; Fornillo, 2015).

El Gobierno de Kirchner basó su política económica en una expansión masiva de la minería. Al mismo tiempo, promovió inversiones específicas en sectores clave del desarrollo científico y tecnológico. El objetivo de producir baterías en Argentina pasó a la agenda política. En su *Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015*, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt) calificó esta meta como un eje estratégico socioproductivo para orientar la política estructural*: Hacia una Argentina innovadora* (Mincyt, 2011). A fines de 2012, con la participación del Conicet (49%), la petrolera estatal ypf (51%) fundó YPF Tecnología (Y-TECtec). y-tec se creó para investigar y desarrollar tecnologías y productos relacionados con el petróleo, el gas y las energías alternativas. La explotación del litio y el desarrollo de baterías han sido las principales áreas de investigación. Asimismo, el Laboratorio de Energías Sostenibles (LAES) se estableció como un proyecto de cooperación entre las universidades de La Plata y Córdoba. En él se investigan las baterías de litio y las pilas de hidrógeno. En la provincia de Jujuy, se inauguró en 2017 el Centro de Tecnología e Investigación General Savio. Además, el instituto Inquimae (Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires), dirigido por Ernesto Calvo, trabaja en un método de extracción de litio con bajo consumo de agua. y-tec ha logrado establecer oficinas y laboratorios en Córdoba, La Plata y Catamarca, y cuenta con una fábrica piloto en Ensenada, cerca de la ciudad de La Plata, para ensayar las escalas de la producción comercial de baterías. Un total de 234 científicos del Conicet de diversas disciplinas están trabajando en el litio. Sin embargo, la innovación argentina se ha resentido cada vez más con la falta de financiamiento (Argento y Zícari, 2017; Dorn, 2021a; Fornillo y Gamba, 2019).

El número de proyectos de extracción de litio ha aumentado de forma considerable en los últimos años, y con él, la atención política sobre los yacimientos de litio. Siguiendo el interés de Cristina Kirchner por la industrialización, el siguiente presidente, Mauricio Macri, consideró los yacimientos de litio como un medio para sostener su política de "lluvia de inversiones". Bajo el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), se esperaba que el litio, además de la agroindustria de la soja y la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, desempeñaran un papel importante en el pago de la deuda nacional. Aunque el deseo social y político de una mayor industrialización del litio es constante,

científicos sociales argentinos como Nacif (2018) y Argento y Zícari (2017) han criticado la falta de crecimiento de la capacidad productiva y del desarrollo económico, así como la ausencia de una estrategia nacional para el litio. En vista de la agobiante deuda nacional, la urgente necesidad de divisas y, en particular, de los conocimientos técnicos necesarios para la producción de baterías, el objetivo de producirlas se ha alejado hacia el futuro.

Conflicto y cooperación

Territorio y agua en la Atacama chilena

En la década de los noventa, cuando la democracia volvió a Chile, los Gobiernos brindaron oportunidades políticas favorables para que las comunidades atacameñas se convirtieran en actores en la formulación de demandas colectivas y en la defensa de la tierra, el agua y otros recursos (para una visión general de la organización indígena y los procesos de configuración de las demandas étnicas, cf. Gundermann y Göbel, 2018; Gundermann y Vergara, 2009).

Después que Chile se anexionara estos territorios a finales del siglo XIX, no se reconoció la propiedad de las tierras de pastoreo tradicionales de las comunidades atacameñas. En la década de los treinta, estas extensas zonas de pastoreo se registraron a favor del Gobierno chileno. Esto incluía tierras sin títulos privados ni reclamaciones hechas por propietarios individuales. Para empezar a transferir la titularidad y el control de la tierra y el agua en la década de los noventa, se establecieron acuerdos entre organismos del Estado. Entre 1996 y 1999 se definieron en la zona los territorios comunitarios atacameños y quechuas.

En cooperación con las organizaciones indígenas, la Corporación Nacional Indígena (Conadi) identificó las tierras y recursos correspondientes a cada comunidad indígena formalizada.[12] Esta fue la base para la acción estatal que permitió la transferencia y emisión de títulos de propiedad. Las organizaciones formularon una demanda conjunta de tierras por tres

12 Por ejemplo, las tierras ancestrales, las tierras comunitarias, el agua corriente, las canteras, los sitios del patrimonio cultural o religioso y los paisajes utilizados para el turismo.

millones de hectáreas, 69.9% de la provincia de El Loa. Esto incluía el Salar de Atacama, el Alto Loa, Ollagüe y la alta cordillera hasta las fronteras con Argentina y Bolivia. Excluía el sector occidental de la comuna de San Pedro de Atacama y la cordillera de Barros Arana, donde se encuentran las grandes minas de cobre, las minas estatales de Codelco y otras con participación de capitales internacionales. En general, la demanda abarcaba las zonas ancestrales atacameñas y quechuas y evitaba los proyectos mineros de cobre, en particular el estatal. El Ministerio de Bienes Nacionales (mbn) y la Conadi, de acuerdo con las organizaciones indígenas, redujeron los compromisos de transferencia a 905 000 hectáreas, que abarcaban áreas con ocupación efectiva por parte de diecinueve comunidades indígenas previamente reconocidas. En la actualidad existen treinta y tres comunidades: veinte atacameñas, tres quechuas y una aymara. Las comunidades fundadas después del acuerdo no han obtenido transferencias de tierras comparables, pero han tenido acceso a otros beneficios, como proyectos de desarrollo local y permisos turísticos.

Tras dos décadas de negociaciones con el Estado, las transferencias de tierras abarcan un total de 398.933 hectáreas, según la información disponible en 2020, es decir, 44.08% de la cantidad acordada. El resto está sujeto a diversas cuestiones legales (concesiones, transferencias con entrega de títulos de propiedad). El ritmo lento de la transferencia de tierras se debe a la incapacidad de la mbn para tramitar tantos casos. Las autoridades suelen atribuirlo a las demandas de tierras superpuestas entre comunidades, pero la cuestión central es la duda por parte de los organismos públicos de que los indígenas puedan controlar zonas fronterizas sensibles, así como por la existencia allí de importantes derechos y actividades mineras.[13] Esto es evidente en particular en el Salar de Atacama. La transferencia de tierras a las comunidades indígenas es inferior a la mitad de la superficie acordada. Incluye aguas superficiales, pero excluye las propiedades mineras de sqm y Albemarle, y otras propiedades con operaciones previstas por nx1 de Peine, Lithium Chile y Wealth Minerals. También excluye la concesión científica de

13 Nadie reconoce públicamente estas sospechas, aunque en privado se preguntan para qué los indígenas quieren tanta tierra.

Conicyt, sectores de la Reserva Natural Los Flamencos, los sitios Ramsar, áreas turísticas y otras propiedades mineras aún no explotadas.

La demanda de tres millones de hectáreas se ha defendido basándose en argumentos étnicos y políticos, pero no se percibe como algo alcanzable. Estas mismas tierras son objeto de reclamos, controversias, reivindicaciones, acciones legales y manifestaciones que involucran a organismos públicos, empresas mineras, empresarios, hoteles, empresas turísticas y agencias científicas. Un ejemplo es la demanda presentada en 2014 por la comunidad de Toconao contra Conicyt por la construcción de un centro científico astronómico (parque astronómico alma ALM) en un área que la comunidad reclama como suya. Del mismo modo, varias comunidades están tratando de establecer dominio preexistente u ocupando físicamente las tierras pendientes de transferencia, lo que rompe con la naturaleza legalista del proceso.

Las aguas superficiales utilizadas por las comunidades de Atacama no estaban sujetas a protecciones legales específicas. En el pasado, esto permitió que se concedieran permisos a empresas públicas y privadas, por ejemplo el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia y la mina de cobre de Chuquicamata. Las empresas que abastecen de agua potable a los centros urbanos de la región de Antofagasta han afectado de forma notable a algunas localidades de la cuenca del río Loa, por ejemplo, Toconce y Aquina-Turi y Estación San Pedro en el Alto Loa. En los inicios de la promulgación de la Ley Indígena de 1993, la propiedad de las aguas y la legislación adecuada para su registro —en ese entonces regulada por el Código de Aguas de 1981 (DFL N.° 1.122)—[14] atrajeron más atención que el destino de las tierras de pastoreo y los territorios indígenas.

Los derechos individuales y las licencias previstas en el Código de Aguas no les protegían suficientemente de las empresas mineras, las compañías de agua potable, los intermediarios especuladores y el creciente sector turístico. Agricultores no indígenas o no organizados vendieron derechos de agua en el oasis de

14 Esta ley considera el agua como un bien social y económico. Establece una separación entre la propiedad de la tierra y la del agua. El Estado concede derechos de uso del agua a particulares o a entidades jurídicas, de forma gratuita y permanente. La ley también permite el comercio en un mercado del agua. Las reformas sucesivas no han modificado esta estructura.

Quillagua, en la zona rural de Calama y en Chiu-chiu y Lasana. Con base en la Ley Indígena, entre 1995 y 1998 las aguas de las cuencas del Salar de Atacama y del Loa, entre Quillagua, al pie del desierto, y el Alto Loa, se registraron a nombre de comunidades indígenas y asociaciones de regantes indígenas. El abogado que asistió a la Conadi señaló que la gran mayoría de los derechos ancestrales de agua de las comunidades atacameñas fueron reconocidos e inscritos legalmente (setenta derechos a favor de dieciocho organizaciones indígenas, por un caudal total de 2 278.8 L/s,) (Cuadra, 2000: 11).

En esos mismos años, también se empezaron a reclamar las aguas subterráneas. Sin embargo, el registro y uso de las aguas subterráneas seguían estando sujetos a los términos del Código de Aguas; es decir, los primeros en registrar las aguas subterráneas eran los propietarios. A este respecto, el mismo abogado subrayó que en los últimos años se han producido situaciones que amenazan la existencia legítima de los derechos sobre el agua. Esto se debe a la fuerte presión de las empresas mineras para extraer aguas subterráneas del territorio atacameño (Cuadra, 2000: 111). Además, la expansión de la minería en la región, el crecimiento de la población urbana, los derechos indígenas al agua y el control previo de las aguas superficiales por parte de Codelco incrementaron la demanda de agua frente a las limitadas fuentes disponibles. Esto incentivó la exploración y constitución de derechos de aguas subterráneas, no siempre para su explotación inmediata, sino como reservas. En la comunidad de San Pedro de Atacama, la exploración de aguas subterráneas fue llevada a cabo por empresas privadas en busca de agua que pudiera ser comercializada en el mercado como agua potable utilizada por empresas mineras, la cooperativa de agua potable de San Pedro de Atacama, establecimientos hoteleros y de servicios, y residentes indígenas y no indígenas.

Cuando las comunidades de Atacama se enfrentaron a otros grupos que registraban sus aguas en tierras que poseían o reclamaban, iniciaron una oposición política, protección judicial y protestas públicas.[15] Sin embargo,

15 El caso de Minera Escondida (bhp Billiton) tuvo gran resonancia local e impacto en proyectos mineros regionales y nacionales. Debido a la presión de organizaciones indígenas y a una resolución negativa del Consejo Regional del Medio Ambiente (Corema), bhp tuvo que abandonar un proyecto de captación de aguas subterráneas en el sector altoandino de Pampa Colorada (alrededor de 1m3 por segundo) (Babidge, 2015; Bolados, 2014; Morales y Azocar, 2015).

las comunidades no siempre han conseguido detener esta pérdida de derechos sobre el agua. Los pozos son propiedad de quienes los construyen y registran. El uso de aguas subterráneas se ha convertido en un tema controvertido porque el agua se encuentra a menudo en tierras demandadas como indígenas o ya reconocidas oficialmente como tales, y las fuentes de agua potable pueden contaminarse, además de sufrir otros impactos ambientales, sobre todo en el Salar de Atacama.

La demanda atacameña de tierra y territorio, de protección del agua y del ambiente, así como de autonomía y representación, es un proceso complejo. Los actores y sus relaciones se producen en el marco de la organización étnica, la acción del Estado, los actores civiles (ecologistas, políticos y expertos) y empresas (con proyectos de inversión o el territorio forma parte de su área de influencia). La política indígena posdictadura de los noventa (Ley 19.253) puso en marcha una nueva organización que reconoce las tierras atacameñas y la protección legal del agua. La aplicación de la Ley de Medio Ambiente de 1997 (Ley 19.300) y sus posteriores reformas es otro hito. Exige que los proyectos de inversión (por ejemplo, de la minería del cobre, de la explotación de salares, los proyectos energéticos, las inversiones hoteleras) obtengan permisos ambientales (mediante declaración o estudio de impacto ambiental) y estén abiertos a la participación ciudadana y a una oposición potencialmente activa. En 2009, la persistente demanda indígena para que se aprobara el Convenio 169 de la oit condujo al final a su ratificación. El convenio proporciona una importante herramienta legal para oponerse a la inversión privada y a la acción pública en la provincia de El Loa. Tanto las comunidades indígenas como, con mayor frecuencia, la cpa lo han utilizado de forma activa, con resultados desiguales. Hoy en día, la consulta indígena es un instrumento clave que las empresas intentan evitar. Se ha exigido su cumplimiento a varios organismos públicos. Con la noción de "valor compartido", la política del litio de 2015 refuerza la necesidad de convergencia de intereses entre las empresas mineras, las comunidades indígenas y las entidades de representación más amplia. En el ámbito nacional, los resultados negativos en el proceso de consulta indígena han llevado a menudo a la desinversión.

Ausencia de conflicto en el Atacama argentino

El Salar de Olaroz-Cauchari se sitúa en el extremo suroccidental de la provincia de Jujuy, a 4 000 metros sobre el nivel del mar. La región ha estado históricamente marginada tanto en el contexto internacional como en el nacional, y en la actualidad forma parte del departamento administrativo de Susques. La mayoría de sus habitantes son descendientes de comunidades indígenas y se identifican a sí mismos como *atacameños.* Sus actividades económicas tradicionales incluyen el pastoreo trashumante (llamas, ovejas, cabras), la agricultura a pequeña escala y el comercio de trueque con caravanas de burros. Estas actividades son importantes desde el punto de vista económico y cultural (Göbel, 2013) y a menudo se complementan con trabajo temporal remunerado, por ejemplo, en la minería. En esta región existen explotaciones mineras a pequeña escala desde principios del siglo xx, sobre todo para extraer oro, plata y borato y, en menor medida, cobre, hierro, plomo y sal. En las décadas siguientes, los grupos locales empezaron a ver un empleo regular con la apertura de varias explotaciones mineras a gran escala, como la mina de estaño y plata Mina Pirquitas, inaugurada en 1935, y la mina de plomo, zinc y plata Mina Aguilar, que inició sus actividades en 1936 (Abeledo, 2017). Hasta la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los pueblos puneños eran pequeños grupos de casas alrededor de una iglesia (cf. Bolsi y Gutiérrez, 1973, para Susques). La mayoría de la gente era muy móvil y vivía dispersa por el campo. El fuerte incremento de la extracción de borato en la segunda mitad del siglo XX y el aumento masivo de todas las actividades extractivas desde la década de los noventa han intensificado los lazos entre la economía pastoral local y la economía capitalista global. El aumento relativo del trabajo asalariado, un mayor control de la educación obligatoria y la introducción de la asistencia social durante los gobiernos de los Kirchner crearon la necesidad de trasladar los hogares a los pueblos.

Las reformas legales e institucionales de la década de los noventa iniciaron cambios profundos. Además de un nuevo marco político-económico para la minería, la reforma constitucional de 1994 reconoció etnias en la población indígena. El artículo 75(17) estableció el estatus legal de las comunidades indígenas y reconoció su propiedad sobre las tierras tradicionales. En 2000,

Argentina ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169), el cual aborda la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la soberanía sobre los territorios que habitan históricamente y la propiedad de todos los recursos naturales de sus tierras. Fundamental es el derecho a la consulta previa a cualquier tipo de proyecto minero dentro de la esfera de influencia directa o indirecta de las comunidades indígenas. En el departamento de Susques, este proceso ha dado lugar a una nueva autoidentificación étnica como *atacameños*. Diez comunidades indígenas han sido reconocidas por el Estado.[16] En 1996, el Gobierno nacional firmó un acuerdo con el Gobierno provincial de Jujuy para legalizar las tierras comunitarias y puso en marcha un programa para lograrlo, denominado Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de Jujuy (PRATPAJ). En el departamento de Susques, se transfirieron los títulos de propiedad de las tierras. Sin embargo, tanto en el contexto nacional como provincial, esto ha sido considerado una excepción (Göbel, 2013; Solá, 2016).

En la provincia de Jujuy, las empresas mineras están obligadas a presentar un informe de impacto ambiental semestral. Los informes son revisados por la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), que comunica a la Autoridad de Aplicación Minera su decisión de aprobar, rechazar, modificar o ampliar el informe. Las comunidades indígenas de la zona afectada están representadas entre los dieciséis miembros del comité de la Ugamp. Este proceso se remonta a la Ley 5063 de 1998 (Ley General del Ambiente de la Provincia de Jujuy), que fue puesta en vigor por el Decreto 5772 en 2010. A partir de la entrega de títulos de propiedad, las empresas mineras exigen la firma de un representante de las comunidades indígenas correspondientes antes de iniciar sus actividades (Pragier, 2019).

Así, por un lado, la "llegada" de las empresas mineras de litio a finales de la década de 2000 coincidió con mejoras generales para la población indígena, nuevas condiciones legales y un mayor grado de organización local. Por otro lado, todos los proyectos mineros de borato cerraron a principios

16 Estas comunidades son Susques, Olaroz Chico, Huancar, Puesto Sey, Pastos Chicos, Catúa, El Toro, Coranzulí, Jama y San Juan de Quillaques.

de 2000. Mina Pirquitas cerró a finales de los ochenta y Mina Providencia cerró en 1997, lo que dejó sin trabajo a muchos residentes locales, en especial a los hombres jóvenes. Debido a la falta de oportunidades educativas, muchos jóvenes abandonaron sus comunidades, por lo que la percepción local de los proyectos mineros de litio es ambivalente. Hay expectativas de empleo para evitar que se marchen los jóvenes. Hay esperanzas de que el litio cumpla la promesa de las empresas mineras de ser el futuro, pero también hay una gran incertidumbre sobre las consecuencias ecológicas. Además de la falta generalizada de estudios hidrogeológicos independientes, existe una marcada asimetría de información entre las empresas mineras de litio y las comunidades indígenas:

> No estoy de acuerdo con el proceso que tenemos actualmente ni con la metodología que utiliza el Estado. Es decir, no estamos trabajando juntos. Las investigaciones se hacen a partir del material existente. Es como si le dieran un libro que no entiende. Una monografía que consta de miles de páginas y explicaciones científicas. Si lo lee, entenderá el 5%. E imagínese si nunca ha leído. Eso es aún peor. Entonces tiene la posibilidad de preguntar, pero si no ha leído el material, ¿qué posibilidad hay de preguntar? (Vicepresidente de la comunidad indígena de Olaroz Chico, entrevista).

La concesión extensiva de licencias sobre tierras comunitarias mercantiliza la propiedad común, lo que debe considerarse en el contexto de una expansión general de la frontera capitalista de los recursos. Esto también conduce a una superposición de diferentes visiones territoriales (Göbel, 2013). La minería del litio implica una territorialidad globalizada de la valoración de un recurso primario. En muchos lugares, esta visión se opone ahora a las territorialidades indígenas locales. Aquí utilizamos la territorialidad como una categoría de práctica performativa (Haesbaert, 2020). En este sentido, el pastoreo no es solo una actividad puramente económica y productiva, sino que también sirve como organización del espacio que da forma a la identidad local (Göbel, 2013; Rivet, 2014). Aunque ha habido protestas individuales, sobre todo de pastores cercanos al salar, todas las amenazas de demandas legales contra las empresas han terminado con el pago de indemnizaciones y el reasentamiento de las familias afectadas (entrevista con abogado de derecho indígena).

A diferencia de lo que ocurre en las comunidades vecinas de la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc, aparte de la resistencia inicial de la comunidad de Susques y del Colectivo La Apacheta (formado por unas pocas familias), que sigue existiendo, no hay una oposición organizada en el departamento de Susques. Las tensiones existentes, la necesidad de una participación más activa y los desacuerdos con las empresas mineras rara vez se traducen en reivindicaciones reales. En cambio, se canalizan en la demanda de más empleos locales.

Contratos y acuerdos entre las comunidades indígenas y las empresas mineras

Chile: De la asistencia social al "valor compartido"

A finales de la década de 2000, las organizaciones indígenas atacameñas se percibían a sí mismas alejadas de la tutela estatal. Pugnaban por una mayor independencia de organismos públicos como la Conadi y los programas de desarrollo gubernamentales. La formación de comunidades y asociaciones indígenas tenía como objetivo canalizar la información, los servicios, las demandas locales y las transferencias hacia y desde el Estado. Una década después de su creación, las limitaciones de las políticas indígenas se hicieron evidentes. El ritmo de reconocimiento de tierras es lento y se retrasó la aprobación del Convenio 169 de la OIT y su promesa de mayor autonomía étnica. La consulta indígena sigue sin ser vinculante y la población manifiesta frustración con el marco institucional de actuación estatal que proporcionan las áreas de desarrollo indígena (ADI). El apoyo público al desarrollo se percibe como limitado.

La postura de una mayor autonomía tiene tres dimensiones. Una pretende reducir la dependencia del Estado en términos de organización, autonomía, desarrollo y control territorial, por ejemplo, la Declaración de Quetena.[17]

17 Esta declaración se realizó en Quetena Grande (Sur Lípez, Bolivia), el 24 de marzo de 2012, por un grupo de dirigentes indígenas durante una feria comercial en el Encuentro de Pueblos Atacameños sin Fronteras. Propone, de acuerdo con la oit 169, exigir a los Gobiernos de Argentina, Bolivia y Chile que reconozcan el territorio de Atacama más allá de las fronteras nacionales.

También implica un mayor escrutinio del liderazgo y la orientación de los representantes y autoridades indígenas. Otra dimensión es la apertura a la sociedad civil (movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales e internacionales, universidades, líderes políticos, profesionales liberales y asesores especializados) y al mundo empresarial (empresas mineras y energéticas, consultores de ingeniería). En las primeras, las comunidades encuentran aliados institucionales y políticos (por ejemplo, en cuestiones ambientales) y conocimientos especializados (sociales, ambientales, jurídicos). En las segundas encuentran asistencia, proyectos locales, financiación organizativa y acuerdos. La tercera dimensión es económica y se refiere a los acuerdos y transferencias financieras de las empresas a las comunidades (presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, entrevista).

Esto ha abierto un espacio para vínculos "privados" que generan sinergias, nuevas capacidades y recursos, pero también ambigüedades y contradicciones.[18] No todas las comunidades participan de la misma manera en este espacio. Dada su nueva importancia, las comunidades han avanzado hacia un tipo de gestión organizativa más compleja y desafiante. Las comunidades directamente afectadas por la explotación de las salinas y el cpa —Peine, Socaire y Toconao— son las que más lejos han llegado en este sentido.[19]

La llegada de la minería del litio en la década de los ochenta suscitó esperanzas de empleo entre las comunidades aledañas al Salar de Atacama. Las empresas mineras ofrecieron ayuda material y financiera a las juntas

18 Esto último queda bien ejemplificado en el caso de la exploración del campo geotérmico de El Tatio para la generación de electricidad, que comenzó en 2008. Debido a la mala gestión de un pozo térmico, se suspendió en 2010. El proyecto encontró la oposición de varios actores locales. La suspensión indefinida del proyecto fue considerada un éxito por el conglomerado de actores que "defienden" El Tatio. Sin embargo, la empresa Northern Geothermics ya había llegado a acuerdos con las comunidades de Toconce y Caspana (Alto Loa). Esto desencadenó la división de la CPA en una cpa Alto Loa y otra que comprendía las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama.

19 La cpa de la cuenca del Salar de Atacama es una organización indígena que actúa en nombre de dieciocho comunidades indígenas atacameñas. Cuenta con oficinas propias en San Pedro de Atacama, emplea a personal profesional y administrativo, y tiene capacidad para contratar asesoramiento de expertos y realizar estudios. Cuenta con una amplia red de relaciones en materia ambiental y dispone de financiación suficiente. Desde 2016, Albemarle es la empresa que les entrega más fondos en términos relativos.

vecinales y comunidades indígenas, entendida como una acción de "buena vecindad" no vinculante. Así lo reflejan los siguientes testimonios:

> En una ocasión los invitamos a una reunión aquí [en una comunidad cercana] [...] los de la empresa nos dijeron que no tenían ninguna obligación de venir a informarnos qué estaban haciendo con el litio o qué estaban produciendo en el Salar (dirigente atacameño, entrevista).

Esto sigue siendo así hoy en día. Sin embargo, a finales de la década de 2000, las condiciones internas (por ejemplo, las demandas territoriales, las opiniones críticas sobre la minería del salar y la extracción de agua, la expansión del turismo) y las condiciones externas, como las demandas ambientales y el Convenio 169 de la oit, provocaron conflictos entre las comunidades indígenas y la minería del salar y otros proyectos de inversión. En respuesta, SQM y Rockwood Lithium empezaron a revisar sus estrategias de relación con las comunidades. En 2007, sqm creó un departamento de gestión ambiental y amplió el área de responsabilidad social corporativa. Rockwood contrató a una consultora especializada para realizar un estudio de impacto ambiental. Hasta entonces, solo existía una declaración de impacto ambiental. Su gerencia intentó abrirse e iniciar un diálogo con las comunidades cercanas. En 2009, Rockwood acordó un contrato con Peine, por el que se establecía una contribución anual de aproximadamente 120 000 dólares (o más, dependiendo de la producción) para el desarrollo local y para que un grupo de la comunidad trabajara en acuerdos ambientales, sociales y laborales. En 2016, la empresa firmó un contrato con la CPA.

Con este contrato, la empresa reconoce la existencia de derechos y reivindicaciones atacameñas sobre el Salar de Atacama y se compromete a la participación indígena en la vigilancia ambiental y a pagos significativos: 3.5% de las ventas totales de litio y potasio, de las cuales 0.5% deben destinarse a estudios de planificación y desarrollo. Con los niveles de producción y precios de 2018-2021, esas transferencias ascendían a entre diez y quince millones de dólares anuales, distribuidos entre dieciocho comunidades y el CPA. Pagos de esta magnitud son desconocidos

en la minería chilena y han sido ampliamente destacados por Albemarle, Corfo y el Ministerio de Minería. La perseverancia de las comunidades indígenas y las fuertes posiciones negociadoras de los directivos de la cpa, reforzadas por el asesoramiento de expertos y empresarios, explican este logro (comunicación personal con ex presidente de la cpa). Además, en ese momento Albemarle estaba negociando con Corfo la revisión y ampliación de su contrato. Unido a una resolución ambiental favorable, la novedosa y sustantiva "licencia social" convirtió a Albemarle en un socio aceptable para impulsar la nueva Política del Litio y la Administración de los Salares. El contrato incluye planes de desarrollo local, informes a la empresa y la dependencia de nuevas transferencias a la eventual corrección de asignaciones de gastos. Pero debido al laxo esquema de regulación financiera, hay resultados heterogéneos en las distintas comunidades, con visiones variables del desarrollo comunitario, las prioridades, la administración y la gestión contable. En 2019, Albemarle encargó a una empresa consultora un informe y una evaluación de esta cuestión. La empresa no ha hecho públicas sus conclusiones.

En cambio, sqm no tiene fama de trabajar en términos de "valor compartido". La empresa destaca su continua relación con las comunidades y la cpa, así como su disposición a realizar acuerdos de desarrollo local, similar a la estrategia de Albemarle. Sin embargo, los acuerdos con Corfo y el intento de abrirse a acuerdos no cumplen las expectativas de una responsabilidad social corporativa ampliada. Son más bien el tipo de respuestas necesarias para ayudar a sqm a avanzar en sus negociaciones con el Estado y para hacer frente a la oposición legal indígena atacameña, la mala prensa, las manifestaciones públicas y las sanciones ambientales.

En 2018, SQM y Corfo acordaron prolongar la extracción hasta 2030 y ampliar aún más la producción de litio. El contrato incluye pagos anuales a las comunidades indígenas y a los municipios de entre diez y quince millones de dólares. Sin embargo, el contrato sqm-Corfo estipula un organismo externo para administrar el dinero, lo que ha sido rechazado por las comunidades y la cpa. Creen que una entidad administrativa externa refleja la desconfianza de los políticos hacia las comunidades. Por el contrario, las negociaciones con Albemarle se consideran el resultado de un diálogo

prolongado y un acuerdo libremente consensuado, que más tarde se trasladó a las negociaciones con Corfo. Un rumor sobre lo dicho por un alto funcionario público, sea cierto o no: " ¿Y qué van a hacer estos indígenas con tanto dinero?" (alcalde de San Pedro de Atacama, entrevista).

Las comunidades quieren recibir sus pagos. Reiteran su autonomía, se mantienen en conversaciones con las empresas y agencias públicas; en unos pocos casos, incluso llegaron a un acuerdo formal con Corfo y SQM. La cpa retrasó el tema, además de incoar demandas en el Tribunal de Medio Ambiente de Antofagasta y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Argentina: asistencia social y acuerdos no vinculantes

A finales de la década de 2000, las empresas mineras de litio empezaron a ponerse en contacto con las comunidades indígenas del departamento de Susques. Hoy existen varios proyectos mineros activos en el Salar de Olaroz-Cauchari.[20] La empresa Sales de Jujuy[21] inició la extracción comercial en 2014. La empresa Minera Exar[22] está construyendo piscinas de evaporación y planea entrar en producción comercial a mediados de 2022. Además de otras licencias, South American Salars[23] y la empresa canadiense Millennial Lithium han realizado exploraciones (Dorn y Ruiz, 2020).

Al principio, estas empresas negociaron con los presidentes de las comunidades. En lugar de negociar con las diez comunidades de la Asociación de Pueblos de Atacama, se centraron en el diálogo bilateral. Emplearon a antropólogos y residentes locales para comprender mejor las necesidades

20 En términos generales, se podría hablar de minería de salinas en lugar de minería de litio. En varios casos, el litio se extrae junto con el potasio y otros minerales. Las empresas que operan en el Salar de Olaroz-Cauchari solo comercializan litio.

21 Sales de Jujuy es una empresa conjunta entre la compañía australiana Orocobre (72.68%), la japonesa Toyota Tsusho (27.32%) y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse; 8.5%).

22 Minera Exar es una empresa conjunta entre la canadiense Lithium Americas (44.8%), la china Ganfeng Lithium (46.7%) y Jemse (8.5%).

23 South American Salars es la filial nacional de la empresa canadiense Advantage Lithium. Con 34.7%, Orocobre es el mayor accionista de la empresa matriz.

de la población local y apoyarles con favores y donaciones de bienes y dinero. En Sales de Jujuy, el departamento de Valores Compartidos cuenta con diez empleados. En Minera Exar, el departamento de Relaciones Comunitarias cuenta con doce empleados. Se realizaron algunos contratos bilaterales y acuerdos no vinculantes para obtener la aprobación del informe ambiental de Ugamp. Sales de Jujuy mantiene un estrecho contacto con las diez comunidades, pero solo firmó un contrato con la más cercana, Olaroz Chico. Minera Exar tiene contratos bilaterales con las seis comunidades de su área directa y esfera de influencia indirecta: Olaroz Chico, Pastos Chicos, Catúa, Puesto Sey, Huancar y Susques. Existen marcadas diferencias entre los contratos. Las otras cuatro comunidades siguen excluidas.[24]

Cuando llegaron las empresas mineras de litio, las comunidades indígenas habían alcanzado un alto nivel de organización interna y podían contar con nuevos marcos legales. Sin embargo, en un plazo relativamente corto y sin compensaciones significativas, en comparación con el contrato cpa-Albemarle, las empresas lograron obtener la aprobación de las comunidades. Podemos identificar seis factores fundamentales que contribuyeron a esta situación.

En primer lugar, la región se encuentra en la Puna de Atacama. A lo largo de su historia, la región ha cambiado de jurisdicción. No se integró a la provincia de Jujuy sino hasta 1943, tras la disolución del Territorio Nacional de los Andes. La historia de la región se caracteriza por la ausencia de rebeliones y conflictos abiertos. A diferencia de las comunidades vecinas de Salinas Grandes (por ejemplo, la Batalla de Quera de 1875 y la marcha Malón de la Paz, de 1946), las comunidades del departamento de Susques han estado históricamente abiertas a la adaptación y la negociación (Dorn, 2021b; Göbel, 2003).

En segundo lugar, al estar históricamente marginada en el contexto nacional, la región cuenta con infraestructuras deficientes, como la falta de escuelas secundarias y de atención sanitaria, el mal estado de las

24 Minera Exar afirma que, a la espera del consentimiento de las seis comunidades, su programa de trabajo local está abierto a las otras cuatro comunidades.

carreteras y las limitadas opciones de transporte y comunicación. Por ello, las empresas se centraron en financiar festivales tradicionales, comprar equipamiento para las escuelas locales y proporcionar transporte y elementos estructurales, como un salón comunitario. Al satisfacer estas necesidades básicas, las empresas mineras de litio pudieron crear de forma rápida un consenso político fundamental entre la población local.

En tercer lugar, el reconocimiento legal de las comunidades indígenas dio lugar a una estructura organizativa paralela a la estructura administrativa del Estado. Las comunidades no disponen de presupuesto propio para promover actividades ni para fortalecer su organización. Los presidentes y vicepresidentes indígenas elegidos prestan servicio sin remuneración y tienen mandatos de uno o dos años. Por tanto, solo las personas con otro trabajo remunerado pueden ocupar el cargo. Esto tiene un efecto excluyente y, como resultado, los intereses de la población trabajadora tienden a estar sobrerrepresentados. En muchos casos, esto da lugar al clientelismo político. Un pequeño grupo cambia los puestos de liderazgo de un lado a otro (vicepresidente de comunidad indígena, Susques, entrevista). Frente a los nuevos proyectos mineros, estas "fallas de construcción" (Göbel, 2013: 144) en la estructura organizativa de las comunidades de Jujuy reducen considerablemente el potencial de acción y de reivindicación de los derechos indígenas. Al ofrecer empleo directo o indirecto a los miembros de la comunidad, las empresas mineras se aprovechan de forma directa de esta situación. En 2019, los presidentes de todas las comunidades relevantes ganaron dinero directa o indirectamente de las empresas mineras (ex presidente de la comunidad indígena de Susques y empresario de Olaroz Chico, entrevistas).

En cuarto lugar, el Estado es el garante de los derechos de las comunidades según el marco internacional y nacional del derecho indígena. Esto incluye la consulta previa por parte de las empresas mineras, la igualdad de acceso a la información, el asesoramiento jurídico independiente y la identificación de oportunidades de desarrollo alternativo. Varios expertos en derecho indígena han coincidido en que estos procesos participativos no se han dado en los proyectos mineros del Salar de Olaroz-Cauchari (abogados de derecho indígena, entrevista).

No existen vínculos con organizaciones u ong regionales, nacionales o internacionales. Por el contrario, la resistencia de las comunidades de Salinas Grandes cuenta con el apoyo de varias organizaciones como el Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (Endepa), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y Amnistía Internacional.

Por último, la población local ya había entrado en relaciones de dependencia con el sistema económico globalizado antes de que llegaran las minas de litio. El cierre de las minas de borato obligó a muchos residentes locales, sobre todo a los hombres, a buscar trabajo fuera de la región. Además, la gente necesitaba residir en un pueblo para recibir asistencia social durante la era Kirchner. En muchos casos, esto llevó al abandono de las actividades pastorales (estudiante de Huancar, entrevista). Con la esperanza de conseguir nuevos empleos locales, las comunidades entablaron rápidas negociaciones bilaterales. Los trabajadores destacan la mejora significativa de las condiciones laborales en la minería del litio en comparación con las condiciones de explotación de las minas de borato.

Estos factores han llevado a las empresas mineras a adoptar un enfoque asistencialista paternalista, en lugar de contratos vinculantes y transparentes. El principal argumento a favor de la colaboración es el empleo local. Como consecuencia de los acuerdos bilaterales y la promoción de contratistas locales, es decir, pequeñas empresas que realizan servicios subcontratados que en su mayoría implican mano de obra no calificada,[25] se ha desarrollado una nueva relación de competencia entre las comunidades. En los primeros años del auge del litio, la comunidad de Susques, los particulares y el colectivo La Apacheta lucharon juntos contra la explotación del litio en su territorio. Sin embargo, la oposición es la excepción. Existe el temor de que otras comunidades acepten los proyectos y sus beneficios, por lo que la mayoría de los votantes están a favor de las minas. Aunque la incertidumbre y las preocupaciones locales se han convertido desde hace tiempo en tensiones internas y descontento, una cita de un vicepresidente local ilustra la mentalidad imperante: "Los

25 Todas estas empresas ofrecen sus servicios solo a una o dos empresas del mismo sector, por ejemplo, una empresa de Olaroz Chico compite ahora con una empresa de Huancar. Solo la comunidad de Olaroz Chico cuenta con dieciséis empresas contratistas.

proyectos están ahí, ahora tenemos que sacar lo mejor de la situación" (tesorero de la comunidad indígena de Susques, entrevista).

Debate: comparación de los impactos sociales de la minería del litio

En esta sección, analizamos los impactos de la minería del salar desde una perspectiva de la ecología política. En Chile, el litio es un recurso estratégico que no puede concesionarse a empresas privadas. A diferencia de la minería del cobre, donde la empresa estatal Codelco es muy activa, el Estado chileno no participa directamente en la explotación del litio. En cambio, la extracción de litio en Argentina sí puede concesionarse a empresas privadas. Dado que los recursos subterráneos pertenecen a las provincias, existen marcos legales nacionales y provinciales para administrar la minería del litio. Esta estructura descentralizada es una diferencia importante respecto al enfoque más centralizado de Chile.

Desde la década de los noventa, ambos países han avanzado en materia legislativa y han ratificado los convenios internacionales sobre protección ambiental y protección jurídica de los grupos indígenas, por ejemplo, el 169 de la OIT. Estas medidas pretenden promover y defender las reivindicaciones y acciones indígenas. Sin embargo, su aplicación efectiva y su alcance son otra historia. En la Puna argentina, las organizaciones locales no se han adaptado a los nuevos actores de la minería de salares. Son limitados los recursos políticos e institucionales, así como los actores como el Estado, los movimientos indígenas regionales, los Gobiernos locales, los activistas ambientales y los expertos. Esto contribuye a la aceptación del dominio paternalista de las empresas mineras. Por el contrario, en las comunidades del Salar de Atacama, las organizaciones locales y representativas están transitando hacia formas más complejas de diseño y gestión institucional. Las oportunidades y los recursos económicos, políticos y profesionales han estado presentes durante las dos últimas décadas, lo cual ha fomentado el desarrollo de nuevas formas de organización, liderazgo y representación del pueblo atacameño y lo ha empoderado a la hora de tratar con las empresas mineras. El profundo contraste entre ambas zonas ilustra la importancia de contar con comunidades indígenas organizadas,

un marco de oportunidades políticas regionales y nacionales, instituciones ambientales, apoyo político regional, una sociedad civil activa y el interés de los medios de comunicación. La ausencia de estos factores impide movilizar recursos para lograr una posición más justa frente a las empresas mineras. En otras palabras, la oposición más pronunciada en Chile se atribuye principalmente a la mayor disponibilidad de recursos económicos, organizativos y políticos. Por el contrario, las asimetrías de poder entre las comunidades y las empresas son más pronunciadas en Argentina, en particular debido a la falta de alternativas y recursos financieros.

Antofagasta es una región minera económicamente importante a la que incluso se denomina "el sueldo de Chile" (cf. Thodes, 2016). Además del cobre, la minería de salares y el desarrollo del Salar de Atacama han tenido un importante impacto local. Mientras que el impacto nacional y regional de la minería del litio y el potasio es menor relativamente hablando, el impacto es muy visible en el ámbito local, sobre todo mediante el empleo directo e indirecto de trabajadores indígenas y no indígenas al sur del salar. Los acuerdos con las empresas mineras aseguran grandes flujos de dinero para el desarrollo local, la educación, los pagos directos e indirectos a los miembros de la comunidad y las organizaciones locales. El mercado de trabajo del turismo local en San Pedro de Atacama y el mercado minero regional, en especial en torno a Calama, tienden a hacer que este impacto sea menos evidente. En la Puna argentina, las empresas mineras de litio tienen más importancia local y regional en forma de empleos directos y contratación de servicios, donde existen pocas alternativas económicas. Aunque Argentina no puede considerarse históricamente una nación minera, está empezando a desempeñar un papel económico fundamental en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Los puestos de trabajo locales son la cuestión clave en todas las negociaciones. Al mismo tiempo, se están profundizando de manera sustancial las dependencias existentes del mercado capitalista.

Tanto los préstamos monetarios como la formación de pequeñas empresas contratistas que ofrecen servicios específicos a las empresas mineras fomentan aún más la dependencia. Basándose en la existencia de un mercado laboral minero regional activo y en una oposición autónoma de las comunidades indígenas, separada de los lazos laborales individuales, las empresas

mineras del Salar de Atacama en Chile no pueden establecer dependencias similares. No obstante, los fondos de las comunidades indígenas, incluido el pago a los dirigentes y los pagos directos e indirectos a los socios, proceden de acuerdos de valor compartido con las empresas mineras de sal y cobre vecinas. La organización actual de Atacama, a menudo denominada "comunidad indígena 2.0", mantiene, por tanto, un nivel sustantivo de dependencia de las empresas mineras. Puede que sea menos dependiente que en Argentina, pero sigue siendo dependiente.

La política nacional chilena sobre el litio tiene como objetivo restablecer a Chile como actor mundial del litio, obtener regalías, estimular las actividades de valor añadido, llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo y desarrollar las comunidades locales. Esto contrasta con la agenda de las comunidades indígenas de Atacama, que luchan por recibir parte de los beneficios de la minería, por tomar posesión de las tierras del salar y sus alrededores reclamando derechos ancestrales de ocupación, y por tener una mayor autonomía de decisión frente a las empresas mineras y el Estado, por ejemplo, la tutela en el acuerdo Corfo-SQM. No encontramos retos comparables para las comunidades de la Puna argentina, que hasta ahora han estado sujetas al esquema paternalista de asistencia social impuesto por las empresas mineras del litio.

El conflicto entre las empresas mineras y las comunidades indígenas es territorial, ambiental y económico. Se inició con la definición de las demandas territoriales y las negociaciones con el Estado chileno a finales de la década de los noventa y se puso en marcha a principios de la década del 2000. Es territorial en la medida en que las zonas de extracción de minerales y aguas subterráneas se encuentran dentro de las tierras ancestrales de las comunidades, poseídas legalmente solo en parte. Los ecologistas consideran que la extracción de salmuera y agua, que ya había comenzado cuando se presentaron las demandas territoriales, tiene consecuencias para el ecosistema y el entorno del salar. El conflicto es económico en términos de compensación financiera por la intervención ambiental y por el uso del territorio y sus recursos para el tránsito, la extracción, las plantas de procesamiento y los campamentos y operaciones mineras. En 2016, las comunidades y sus organizaciones aceptaron una compensación de Albemarle. Las compensaciones negociadas entre SQM y Corfo siguen siendo cuestionadas,

aunque algunas comunidades han establecido ya acuerdos. Todo esto es de conocimiento general en Olaroz-Cauchari y en las comunidades atacameñas de la Puna argentina, pero no se traduce en un conflicto abierto. Sin embargo, la creciente competencia entre y dentro de las comunidades indígenas de la cuenca Olaroz-Cauchari puede desembocar en un conflicto futuro.

Por último, en cuanto a la ecología de los salares, el marco institucional, los actores, el trabajo, las relaciones de poder y los conflictos permiten identificar a los ganadores y perdedores del cambio ambiental provocado por la minería del litio. En Chile, las aguas superficiales para uso tradicional no se han visto afectadas, pero las aguas subterráneas se utilizan tanto como agua potable como para fines industriales en el borde sur y este de la cuenca del Salar de Atacama. Las organizaciones locales siguen insistiendo en el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. También hacen hincapié en los daños a la superficie del salar, las zonas de lagunas, las capas freáticas y la composición de la salmuera, así como en los impactos sobre la flora y la fauna del ecosistema. Existen preocupaciones similares en Argentina, por ejemplo, por el pastoreo cerca del salar, pero estas comunidades tienen pocas oportunidades de fortalecer su posición como lo han hecho las de Chile. Estas preocupaciones ponen de manifiesto la relación altamente ambivalente de la población local con la minería del litio. Las asimetrías de poder impiden que estas preocupaciones conduzcan a un cambio real.

Hasta hace muy poco, no existían conocimientos expertos independientes sobre la dinámica ecológica, ni siquiera en Chile, aunque las empresas mineras han realizado estudios y modelizaciones hidrológicas. Lo mismo puede decirse de los salares argentinos. La falta de evaluaciones externas exhaustivas subraya la posición de poder de las empresas en la continuidad, ampliación y limitación de los compromisos ambientales. Debido al lenguaje técnico de los estudios e informes elaborados para las empresas, los dirigentes indígenas a menudo ni siquiera entienden lo básico.[26] Desde 2014, la posición del Estado

26 Cuando Rockwood Lithium presentó su proyecto de expansión en el Salar de Atacama, la comunidad de Toconao señaló que era imposible comprender la información técnica sin la ayuda de asesores independientes. Además, señalaron que 90% de la asamblea entendía poco o nada sobre los contenidos y la metodología (comentarios al estudio de impacto ambiental de Rockwood Lithium por la comunidad de Toconao, 2011).

chileno ha cambiado, puesta en marcha por Corfo y el Ministerio de Minería. Hay nuevos estudios sobre el ecosistema del Salar de Atacama y las consecuencias de la minería. Por ejemplo, un estudio encargado por el Comité para la Administración del Litio y el Salar identificó distorsiones e insuficiencias en la información. Las comunidades y la cpa mantienen vínculos con consultores externos y contratan a profesionales. Han conseguido iniciar un seguimiento conjunto con las empresas y los Servicios de Evaluación Ambiental (SEA) para que la información esté más disponible y sea más transparente. En el lado argentino, las comunidades están lejos de lograr avances similares.

Reflexiones finales

En este artículo hemos analizado las relaciones entre las empresas mineras, el Estado, las comunidades indígenas y las implicaciones socioterritoriales de la minería del litio en las cuencas del Salar de Atacama y de Olaroz-Cauchari. En ambos estudios de caso, la minería del salar ha provocado profundas transformaciones socioterritoriales. Debido a entornos institucionales y relaciones de poder divergentes, estas transformaciones se han materializado de forma diferente en Chile y Argentina.

Las relaciones de poder entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades indígenas revelan grandes desequilibrios. Las asimetrías son especialmente evidentes en lo que respecta al precario mercado laboral local. Mientras que la población de los alrededores del Salar de Atacama dispone de numerosas alternativas de empleo, como en la minería regional del cobre y el turismo, las comunidades de Olaroz-Cauchari temen que sus pueblos se extingan debido a la emigración de los jóvenes y a los posibles daños ambientales. Esto no solo ilustra la falta de posibilidades de acción de la población local, sino que también denota el carácter estructural del conflicto. Además, subraya la superior posición negociadora de las comunidades chilenas y explica cómo han podido conseguir, entre otros beneficios, contratos negociados con pagos directos.

Teniendo en cuenta la limitada vida útil de cualquier proyecto minero, la creación de valor local a largo plazo sigue siendo una gran incógnita.

En el caso de Argentina, es evidente en particular que los beneficios de la minería de la sal se distribuyen de forma desigual a favor de las empresas internacionales. Al mismo tiempo, los costos sociales y ecológicos a largo plazo se distribuyen de forma asimétrica en detrimento de los habitantes locales. Este desequilibrio se ve subrayado por la falta generalizada de estudios ecológicos independientes. Existen diferencias significativas entre las comunidades del Salar de Atacama y de Olaroz-Cauchari. Las comunidades chilenas están cada vez más organizadas y son conscientes de los efectos a largo plazo de la explotación minera del salar. Han realizado varios esfuerzos hacia la creación de valor local: asociaciones con empresas mineras para generar energía solar en el desierto de Atacama, productos agrícolas rurales con buen valor de mercado, infraestructuras y servicios turísticos y apoyo financiero de las empresas mineras. Se trata de ideas prometedoras que avanzan lento y que a veces se ven obstaculizadas dentro de la propia comunidad indígena, como el anteproyecto de instalar paneles solares para llevar energía a la comuna de San Pedro de Atacama y vender la energía sobrante a los proyectos mineros. En Olaroz-Cauchari siguen faltando estos actores indígenas autónomos. La organización indígena, la conciencia de futuro y el interés por explorar opciones para crear valor local siguen subsumidos por el dominio de las empresas mineras. A ello se suma el consentimiento de las autoridades provinciales y nacionales a favor de la minería.

El caso chileno presenta varias paradojas. Por un lado, el modelo económico neoliberal chileno favorece la extracción privada. Por otro, por razones históricas, el litio no puede ser objeto de licencia y se sujeta a la intervención del Estado. En consecuencia, la política estatal del litio y la gobernanza del salar se organizan de forma centralizada. La política implica regalías elevadas y exige compromisos ambientales y sociales, incluidos vínculos empresa-comunidad bajo la noción de "valor compartido". La política de reconocimiento étnico garantiza derechos indígenas exigibles en términos de territorio, extracción y ambiente. Por medio de negociaciones independientes y algunas dirigidas por el Estado, las empresas mineras apoyan financieramente este proceso. En Argentina no existe un proceso comparable. La extracción de litio se realiza mediante permisos. Su exportación responde a la necesidad urgente de divisas para financiar la deuda nacional. En este

escenario, las consecuencias políticas de la oposición, o del conflicto empresa-comunidad, son más frágiles. Además, las comunidades de la Puna argentina se enfrentan a una persistente falta de oportunidades de empleo con el declive de la minería del borato.

El auge del litio está claramente vinculado a la creciente demanda de almacenamiento de energía en el contexto de la electromovilidad mundial. Aunque a menudo se considera que la electromovilidad forma parte de un mercado de futuro sostenible, nuestro análisis muestra que los discursos de desarrollo que subyacen tanto a la electromovilidad y a la extracción de litio como la economía verde y el neoextractivismo profundizan las relaciones globales Norte-Sur existentes, las desigualdades sociales y las asimetrías de poder. Por tanto, perpetúan un modo de vida imperial (Brand y Wissen, 2017). En este sentido, se revela el carácter ambiguo y paradójico de la minería del litio.

Referencias

Abeledo, S. H. (2017). Minería de boratos en la Puna argentina: participación en la actividad extractiva y su incidencia en el modo de la vida local en Santa Rosa de los Pastos Grandes, Provincia de Salta. *Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad*, *3*(10), 139-161.

Argento, M. (2018). Espejo de sal: estructuras de la acción colectiva e integración territorial del proyecto de extracción e industrialización del litio en Bolivia. *Estado & Comunes. Revista de Políticas y Problemas Públicos*, *2*(7), 227-248. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v2.n7.2018.89

Argento, M. y Zícari, J. (2017). Las disputas por el litio en la Argentina: ¿materia prima, recurso estratégico o bien común? *Prácticas de Oficio*, *1*(19), 37-49.

Aserta Consultores. (2010). *Condiciones presentes y futuras para la explotación del litio.*

Babidge, S. (2015). Contested value and an ethics of resources: water, mining and indigenous people in the Atacama Desert, Chile. *The Australian Journal of Anthropology*, *27*(1), 1-20. https://doi.org/10.1111/taja.12139

Babidge, S., F. Kalazich, M. Prieto y K. Yager. (2019). That's the problem with that lake; it changes sides': mapping extraction and ecological exhaustion in the Atacama. *Journal of Political Ecology*, *26*(1), 738-760. https://doi.org/10.2458/v26i1.23169

Bebbington, A. J., L. Hinojosa, D. Humphreys-Bebbington, M. L. Burneuo y X. Warnaars. (2008). Contention and ambiguity: mining and the possibilities of development. *Development and Change*, *39*(6), 887-914. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2008.00517.x

Bolados, P. (2014). Los conflictos etnoambientales de "Pampa Colorada" y "El Tatio" en el Salar de Atacama, norte de Chile. Procesos étnicos en un contexto minero y turístico transnacional. *Estudios Atacameños*, *48*, 229-248. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432014000200015

Bolsi, A. S. y R. Gutiérrez. (1973). Susques. Notas sobre la evolución de un caserío puneño. *Revista Geográfica*, *7*, 41-69.

Brand, U. y M. Wissen. (2017). *Imperiale Lebensweise - Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus*. Oekom

Bridge, G. (2004). Mapping the bonanza: geographies of mining investment in an era of neoliberal reform. *The Professional Geographer*, *56*(3), 406-421. https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.2004.05603009.x

Catalano, L. R. (1964). *Boro - berilio - litio: una nueva fuente natural de energía*. Ministerio de Economía de la Nación.

Chong, G., J. Pueyro y C. Demergasso. (2000). Los yacimientos de boratos en Chile. *Revista Geológica de Chile*, *27*(1), 99-119. http://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082000000100007

Comisión Nacional del Litio. (2015). *Litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile: Informe final*.

Cuadra, M.(2000). Teoría y práctica de los derechos ancestrales de agua de las comunidades atacameñas. *Estudios Atacameños*, *19*, 93-112. https://doi.org/10.22199/S07181043.2000.0019.00005

Dorn, F. M. (2021a). *Der Lithium-Rush. Sozial-ökologische Konflikte um einen strategischen Rohstoff in Argentinien*. Oekom

Dorn, F. M. (2021b). Changing territorialities in the Argentine Andes: lithium mining at Salar de Olaroz-Cauchari and Salinas Grandes. *Die Erde. Journal of the Geographical Society of Berlin*, *152*(1), 1-17. https://doi.org/10.12854/erde-2021-515

Dorn, F. M. y F. Ruiz Peyré. (2020). Lithium as a strategic resource: geopolitics, industrialization and mining in Argentina. *Journal of Latin American Geography*, *19*(4), 68-90. https://doi.org/10.1353/lag.2020.0101

Fornillo, B. (2015). Leyes sobre el litio: ¿recurso estratégico minero u oportunidad científico-industrial? *Realidad Económica*, *295*, 134-138.

Fornillo, B. y M. Gamba. (2019). Industria, ciencia y política en el Triángulo del Litio. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, *30*(58), 1-38.

Geisse, G. (1983). *Economía y política de la concentración urbana en Chile*. Colegio de México / PISPAL.

Göbel, B. (2003). "La plata no aumenta, la hacienda sí": continuidades y cambios en la economía pastoril de Susques (Puna de Atacama). En A. Benedetti (coord.), *Puna de Atacama. Sociedad, economía y frontera* (pp. 199-242). Alción Editora.

Göbel, B. (2013). La minería del litio en la Puna de Atacama: interdependencias transregionales y disputas locales. *Iberoamericana*, *13*(49), 135-149. https://doi.org/10.18441/ibam.13.2013.49.135-149

Gundermann, H. y B. Göbel. (2018). Comunidades indígenas, empresas del litio y sus relaciones en el Salar de Atacama. *Chungara. Revista de Antropología Chilena*, *50*(3), 471-486. https://doi.org/10.4067/S0717-73562018005001602

Gundermann, H. y J. I. Vergara. (2009). Comunidad, organización y complejidad social andinas en el norte de Chile. *Estudios Atacameños*, *38*, 107-126. https://doi.org/10.4067/S0718-10432009000200008

Haesbaert, R. (2020). Territory/ies from a Latin American perspective. *Journal of Latin American Geography*, *19*(1), 258-268. https://doi.org/10.1353/lag.2020.0005

Hafner, R., G. Rainer, F. Ruiz Peyré y M. Coy. (2016). Ressourcenboom in Südamerika: Alte Praktiken - neue Diskurse? *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, *60*(1-2), 25-39. https://doi.org/10.1515/zfw-2016-0002

Lagos, G. (2012). *El desarrollo del litio en Chile (1984-2012)* [publicación electrónica].

mincyt. (2011). *pncti 2012-2015: Hacia una Argentina innovadora. Plan nacional de ciencia, tecnología e innovación*. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Moraga, A., G. Chong, M.A. Fortt y H. Henríquez. (1974). Estudio geológico del Salar de Atacama, Provincia de Antofagasta. *Boletín del Instituto de Investigaciones Geológicas*, *29*, 59.

Morales, H. y R. Azocar. (2015). Minería y relaciones interétnicas en Atacama. *Estudios Atacameños*, *51*, 49-63. https://doi.org/10.4067/S0718-10432016005000003

Nacif, F. (2015). Producción de litio en la Argentina: sobre la ley y el debate. *Realidad Económica*, *295*, 138-146

Nacif, F. (2018). El abc del litio sudamericano: apuntes para un análisis socio-técnico. *Revista de Ciencias Sociales*, segunda época, *10*(34), 49-67.

Nacif, F. (2019). *Litio en Argentina: de insumo crítico a commodity minero. Trayectoria socio-técnica de los yacimientos litíferos de la Puna (1930-2015)* [tesis de maestría, Universidad Nacional de Quilmes].

Obaya, M. (2019). *Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia*. Cepal, Documentos de Proyectos.

Paolasso, P., G. Rainer, F. Ruiz, Peyré y M. Coy. (2013). Entwicklungstendenzen im ländlichen Raum Nordwest-Argentiniens: Antriebskräfte, Konflikte, Räumliche Konsequenzen. *Geographische Rundschau*, *65*(12), 14-21

Poveda Bonilla, R. (2020). *Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en Chile*. Cepal, Documentos de Proyectos.

Pragier, D. (2019). Comunidades indígenas frente a la explotación de litio en sus territorios: contextos similares, respuestas distintas. *Polis. Revista Latinoamericana*, *52*, 1-20.

Rivet, M. C. (2014). Territorialidad colonial en Atacama. El caso de Coranzulí (provincia de Jujuy, Argentina). *Estudios de Antropología e Historia Nueva Serie*, *2*(1), 123-139.

Slipak, A. M. (2015). La extracción del litio en la Argentina y el debate sobre la "riqueza natural". En B. Fornillo (coord.), *Geopolítica del litio – industria, ciencia y energía en Argentina* (91-122). El Colectivo.

Solá, R. (2016). Kachi Yupi: un ejercicio de autodeterminación indígena en Salinas Grandes. En *Informe ambiental anual 2016*. Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Svampa, M. (2008). *Cambio de época: movimientos sociales y poder político*. Siglo xxi.

Svampa, M. (2019). *Neo-extractivism in Latin America socio-environmental conflicts, the territorial turn, and new political narratives*. Cambridge University Press.

Thodes Miranda, E. (2016). Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile. *Notas de Población*, *102*(enero-junio), 203-227.

USGS. (2020). *Mineral commodity summaries: lithium*.

Walter, M. y J. Martínez-Alier. (2011). How to be heard when nobody wants to listen: community action against mining. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, *30*(1-2), 281-301. https://doi.org/10.1080/02255189.2010.9669292

Walter, M. y L. Wagner. (2021). Mining struggles in Argentina. The keys of a successful story of mobilization. *The Extractive Industries and Society*, *8*(4), 100940. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100940

39. Resistencia a los proyectos mineros canadienses en México: lecciones del ciclo de vida de la mina San Xavier en San Luis Potosí*[1]

Darcy Tetreault[2]

Resumen: Este artículo analiza los movimientos de resistencia a los grandes proyectos de minería en México, en particular el caso de la resistencia organizada sostenida contra la Minera San Xavier (MSX), en el estado de San Luis Potosí, en el centro norte de México. Al ser una de las primeras luchas en ese país en contra de los proyectos mineros canadienses después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los líderes del movimiento fueron pioneros en buscar estrategias de resistencia en el frente legal y jugaron un papel decisivo en la construcción de alianzas y redes antimineras en los ámbitos nacional e internacional. Ahora que el proceso de excavación ha terminado y la mina entra la fase de cierre, este artículo recurre al caso para ilustrar la complementariedad de tres marcos de interpretación de la resistencia a la minería: mediante la lucha de clases, los conflictos ecológicos distributivos, y el choque entre valoraciones culturales sobre la vocación territorial. El argumento es que estos tres acercamientos no son mutuamente excluyentes; pueden combinarse para explicar las múltiples dimensiones de luchas específicas, cuyos

---

1 Publicado originalmente en: Darcy Tetreault, 2019, "Resistance to Canadian mining projects in Mexico: lessons from the lifecycle of the San Xavier Mine in San Luis Potosí", *Journal of Political Ecology*, 26(1): 84-104.

*N. de T.: Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

2 Prof. Darcy Tetreault, doctor, Departamento de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Correo electrónico: darcy_tetreault@yahoo.com. La autora desea expresar su gratitud a Paul Bowles por su diálogo constructivo y sus comentarios durante el proceso de investigación y elaboración de este artículo, y a dos revisores anónimos por sus sugerencias para reforzar una versión anterior.

cambios de énfasis en diferentes momentos de la lucha son condicionados por —y condicionan— la fase del desarrollo de la mina. Al contextualizar el estudio de caso en un análisis más amplio de los conflictos socioambientales en torno a la minería en México y otras partes de América Latina, se busca ilustrar cómo la lucha en contra de la msx presenta sus peculiaridades y, al mismo tiempo, es representativa de tendencias generales. En el plano local, se identifica que la lucha tiene más que ver con la defensa de las condiciones sociales y culturales de reproducción que la protección de los medios de vida y producción tradicionales. Esto se refiere no solo a un medio no contaminado y a la disponibilidad de agua limpia para el consumo humano, sino también a la conservación del patrimonio natural y arquitectónico con importancia histórica y cultural.

Palabras clave: conflictos mineros, imperialismo canadiense, formación política de clases, distribución ecológica, valoraciones culturales.

Introducción

La Minera San Xavier (MSX), en el estado centro-norte de San Luis Potosí, México, fue la primera de varias grandes minas de oro a cielo abierto de propiedad canadiense que se anunciaron en el país tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. La extracción de mineral, sin embargo, no se puso en marcha sino hasta 2007, en gran parte debido a los retrasos asociados a la resistencia sostenida a la empresa. El movimiento de oposición a la MSX puede considerarse pionero en la resistencia a los proyectos mineros canadienses en México; ha modelado otras luchas contra proyectos mineros a gran escala y contribuido a la formación de redes de organizaciones que se oponen a la megaminería tóxica en los ámbitos nacional e internacional. Ahora que, como se anunció en 2016, el proceso de excavación ha finalizado y la mina está cerrando, el artículo pretende basarse en este caso para contribuir a los debates sobre la naturaleza de los movimientos de resistencia a los proyectos mineros a gran escala en México y en otros lugares de América Latina.

El análisis y la argumentación proceden de la siguiente manera. En primer lugar, se contextualiza el estudio de caso en un breve examen de los conflictos mineros en México y el resto de América Latina, y de los debates conexos sobre el "nuevo extractivismo" y el "nuevo imperialismo" de Canadá en el sector minero latinoamericano. En la siguiente sección se esbozan tres enfoques para interpretar la resistencia a la minería: la lucha de clases, los conflictos de distribución ecológica y el choque de valoraciones culturales sobre la vocación territorial. El argumento esgrimido es que estos enfoques no se excluyen mutuamente, sino que pueden combinarse de forma complementaria para explicar las múltiples dimensiones de luchas específicas, con cambios de énfasis en distintos momentos de la lucha, que están condicionados por —y condicionan— la fase de desarrollo de una mina. Así lo ilustra el estudio de caso, que comienza con una breve reseña histórica de la minería y la lucha de clases en Cerro de San Pedro, el municipio donde se ubica la msx, para pasar después a examinar la resistencia organizada contra la msx desde la óptica de los tres enfoques mencionados. La sección final presenta las lecciones teóricas y políticas derivadas de analizar el caso de la msx a través de estas ópticas.

Conflictos mineros en México y América Latina

Los conflictos en torno a las actividades mineras a gran escala se han multiplicado en México y en otros lugares de América Latina desde principios del siglo XXI. A mediados de 2018, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal) había registrado 247 conflictos mineros en América Latina, 43 de ellos en México. Según el esquema de clasificación del Ocmal, las causas inmediatas más comunes de estos conflictos son las actividades extractivas, los derrames, la contaminación y la usurpación de tierras y recursos hídricos. En este inventario, México tiene el mayor número de conflictos de la región, seguido de Chile con 41 y Perú con 39. En una revisión más exhaustiva en la perspectiva nacional, Pérez Jiménez (2014) detectó 82 conflictos territoriales en torno a la minería en México e identificó como principales causas inmediatas los impactos ambientales, el despojo del territorio y el agua, y las relaciones inequitativas con las empresas mineras transnacionales.

Los conflictos mineros no solo tienen lugar en los países latinoamericanos que se han adherido a las agendas políticas neoliberales ortodoxas, como México, Colombia y Perú. También están teniendo lugar en países que tienen —o han tenido recientemente— los llamados Gobiernos "progresistas" o "posneoliberales", que pretenden aumentar la participación del Estado en los ingresos mineros para financiar programas de desarrollo social y de lucha contra la pobreza. Entre ellos se encuentran Bolivia y Ecuador, donde los movimientos sociales populares liderados por pueblos indígenas llevaron al poder a Gobiernos progresistas durante el segundo quinquenio del siglo XXI (2006-2010), así como una reforma constitucional para reconocer los derechos de la Madre Tierra como parte de una visión de desarrollo alternativa del "vivir bien".

En los últimos años, se ha debatido mucho sobre los conflictos mineros en el marco más amplio del análisis de la expansión y aceleración de las actividades extractivas en toda América Latina. Cypher (2010) describe esta tendencia como la "reprimarización" de las economías nacionales de la región, en referencia a la creciente participación de los bienes primarios en la composición de las exportaciones. En el contexto de los elevados precios de las materias primas durante la primera década del siglo xxi, impulsados en gran parte por el rápido crecimiento económico de China, los Gobiernos de toda la región fomentaron una amplia gama de actividades extractivas, no solo la minería, sino también la explotación de petróleo y gas, la tala de árboles y la producción agroindustrial de monocultivos modificados genéticamente.

Svampa (2015) lo denomina "el consenso de las materias primas", según el cual todos los Estados de la región, con independencia de su orientación ideológica, han recurrido a la promoción de las actividades extractivas como medida para estimular el crecimiento económico y sostener las finanzas públicas. Asimismo, Veltmeyer y Petras observan una "coincidencia de intereses económicos" entre los Gobiernos progresistas posneoliberales de Sudamérica y el capital extractivo, es decir, "compartir el botín" en forma de "beneficios inesperados y mayores reivindicaciones sobre la renta del suelo" (2014: 28). Desde esta perspectiva crítica, el nuevo extractivismo se reduce a que los Estados reciban una mayor parte de la renta, que

se utilizará para financiar la ampliación de las infraestructuras para el desarrollo económico y las políticas sociales, en especial los programas contra la pobreza, con lo que "se garantiza un apoyo popular continuado al impulso extractivista especialmente entre las clases trabajadoras urbanas y periurbanas" (Arsel *et al*., 2016, p. 881; cf. Acosta, 2013; Gudynas, 2010; Hogenboom, 2012; Svampa, 2015; Veltmeyer y Petras, 2014).

El nuevo extractivismo se ha traducido en una aceleración del ritmo de explotación de los recursos naturales en la región. Según un recuento, la tasa de extracción de materiales de la región latinoamericana —incluyendo biomasa, combustibles fósiles, minerales de construcción, minerales metálicos y metales industriales— se duplicó entre mediados de los años noventa y 2009, para alcanzar más de ocho mil millones de toneladas métricas el año pasado (Martínez y Walter, 2016: 71). Martínez y Walter observan que "el auge de la extracción de materias primas en América Latina ha sido significativo en particular en el caso de los minerales metálicos" (2016: 70), y calculan que estos representaron 25% del peso total de los flujos de materiales procedentes de América Latina en 2009, solo superados por la biomasa.

A partir de este tipo de análisis de los flujos materiales y energéticos, Delgado (2010)[3], Martínez y Walter (2016) y otros ecólogos políticos han observado déficits comerciales *físicos* persistentes (medidos en términos de volumen y peso) para América Latina en sus relaciones comerciales con el centro de la economía mundial, en particular Estados Unidos, y describen estas relaciones como una forma de "intercambio ecológicamente desigual" que no tiene en cuenta las "externalidades" ambientales y sociales de las localidades. En términos marxistas, el flujo neto desde el Sur global hacia el Norte de materiales, energía y activos financieros valorados mediante la apropiación de las rentas monopolísticas del suelo equivale a una forma de "imperialismo ecológico" (Bellamy y Clark, 2004)[4] o lo que Veltmeyer y Petras (2014) llaman el "imperialismo del siglo XXI".

3 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

4 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

En el sector minero de América Latina, es el imperialismo canadiense el que ha ocupado un lugar central (Denault y Sacher, 2012; Gordon, 2010; Gordon y Webber, 2008; 2016). Varias cifras dan dimensión a la importancia del capital minero canadiense en América Latina y el mundo. Seis de cada diez de las mayores empresas mineras del mundo cotizan públicamente en la Bolsa de Toronto (TSX) o en la tsx Venture Exchange, que representaron 62% del capital minero mundial recaudado en 2014 (Asociación Minera de Canadá, 2016: 6)[5]. Según Dougherty, las empresas mineras buscan "rentas financieras" constituyéndose legalmente en Canadá "donde la financiación de capital para las empresas mineras junior está muy subvencionada y el gobierno corporativo es indulgente" (2013: 339). En 2015, las empresas mineras que cotizan en el tsx representaron un tercio de la inversión global en exploración de minerales no ferrosos en todo el mundo. Fuera de Canadá, la mayoría de estas empresas y proyectos se localizan en América Latina, donde hay 1 134 proyectos de propiedad canadiense en total. Más de la mitad de los activos mineros canadienses en el extranjero, valorados en 88.500 millones de dólares canadienses (66.700 millones de dólares estadounidenses), se encuentran en América Latina (Natural Resources Canada, 2017). Sin embargo, los patrones de inversión en sí mismos no constituyen el imperialismo. Si tomamos el nuevo imperialismo como "el funcionamiento dinámico de [...] el Estado capitalista en el centro del sistema en su apoyo activo al capital extractivo" (Veltmeyer y Petras, 2014: 2), entonces podemos observar los siguientes mecanismos del imperialismo canadiense en funcionamiento en América Latina (Denault y Sacher, 2012; Gordon, 2010; Gordon y Webber, 2016):

- Promover la difusión de reformas neoliberales para facilitar y fomentar la inversión extranjera directa (IED).
- Intervenir en la reescritura de la legislación minera para crear climas favorables para la inversión.
- La escasa regulación del TSX.

5 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

- Proporcionar beneficios fiscales.
- Subvenciones directas y apoyo diplomático a las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero.
- Negarse a regular las operaciones canadienses en el extranjero, dependiendo en cambio en códigos corporativos de responsabilidad social voluntarios.

En México, el apoyo de la Embajada canadiense a las empresas mineras con sede en Canadá es prácticamente incondicional, como ilustra el notorio caso de Blackfire Exploration, con sede en Calgary, cuyas conflictivas operaciones mineras en el estado de Chiapas culminaron con el asesinato del activista local contra la minería Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009. Como reveló Mining Watch Canada:

> Incluso después de que Abarca hubiera sido asesinado, la mina hubiera sido suspendida y las acusaciones de corrupción hubieran salido a la luz, la Embajada siguió defendiendo a la empresa ante los funcionarios estatales mexicanos y le proporcionó información sobre cómo demandar al estado de Chiapas en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) por el cierre de la mina (en Moore y Colgrove, 2013: I).

De este modo, el tlcan proporciona un marco jurídico para que las empresas canadienses demanden a los Gobiernos por la pérdida de inversiones a fondo perdido y de oportunidades de obtener beneficios en caso de que los Gobiernos se pongan del lado de los movimientos de oposición empeñados en cancelar los proyectos mineros. Como veremos, este fue un factor que entró en juego durante la lucha para bloquear la Minera San Xavier en el estado de San Luis Potosí.

Dentro de América Latina, México es el país con el mayor número de minas canadienses en producción, con 48 en 2012 (Heidrich, 2016: 202). Este número representa más de la mitad del total de minas en producción en México en 2013, que según el Servicio Geológico Mexicano era de 83. Ese mismo año, había en México 668 proyectos mineros en fase de exploración, 37 en proceso de desarrollo y 69 en suspensión. De las 288 empresas mineras extranjeras en el país, 208 son canadienses. New Gold, que ahora es propietaria de la msx, tras fusionarse

con Metallica Resources y Peak Gold en 2008, se encuentra entre los mayores inversores en el país. Otras incluyen Gold Corp, Pan American Silver, First Majestic Silver, Capstone, Argonaut Gold, Timming Gold, Endeavour Silver, Fortuna y Excellon Resources. Estas empresas compran y ponen en producción los yacimientos descubiertos por empresas *junior*, en su mayoría canadienses, que han tomado la delantera en la exploración minera desde que el sector se liberalizó a principios de la década de los noventa, con las ventajas competitivas que proporcionó el tlcan después de 1994 (Dougherty, 2013). Las empresas mineras canadienses van sobre todo tras el oro y la plata. Al hacerlo, están ampliando la frontera minera en México y en otros lugares, peinando regiones mineras conocidas en busca de reservas de baja calidad explotables mediante minería a cielo abierto, y desarrollando megaproyectos mineros tóxicos en regiones aisladas habitadas por grupos indígenas y campesinos. De los veintinueve conflictos mineros de gran repercusión en México analizados por Tetreault (2014), dieciocho implicaban a empresas mineras canadienses.

Sin embargo, el apoyo activo del Gobierno canadiense a los intereses de las empresas mineras con sede en Canadá solo puede dar cuenta de una parte de una explicación más compleja y holística del creciente número de conflictos mineros en México, donde la oligarquía mexicana ha abrazado y dado forma a las reformas estructurales neoliberales para sus propios intereses. En este punto, es importante tener en cuenta que el sector minero mexicano se abrió unilateral y completamente a la ied dos años antes de la firma del tlcan. Las reformas neoliberales fueron extendidas al sector por el Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) de tal manera que beneficiaron a empresarios mexicanos bien conectados, transfiriéndoles las reservas minerales y la infraestructura minera propiedad del Estado a precios muy por debajo de su valor de mercado y con poca transparencia (Delgado y Del Pozo, 2005). El legado de este proceso de privatización ha sido que un puñado de gigantescas empresas mexicanas, integradas verticalmente y con orientación transnacional, siguen dominando el sector. Empresas entre las que destacan Grupo México (propiedad de Germán Larrea), Industrias Peñoles (Alberto Bailleres), Minera Frisco (Carlos Slim) y Grupo Acerero del Norte (Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira Elizondo).

Tras transferir el grueso de los activos mineros a estos empresarios, el sector se abrió para permitir que empresas de capital cien por cien extranjero se dedicaran a todos los tipos y fases de la actividad minera. Así lo estableció la Ley Minera de 1992, que también eliminó los límites máximos de extensión a las concesiones mineras, amplió la duración de las concesiones de veinticinco a cincuenta años, haciéndolas renovables posteriormente por otros cincuenta años, y estableció que las actividades mineras "tendrán preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento productivo de la tierra" (Artículo 6). Además, hasta 2014, las empresas mineras que operaban en México no tenían que pagar regalías y la tasa impositiva efectiva y el costo de las concesiones eran tan bajos, que su contribución directa a las arcas públicas sólo ascendió a 1.2% del valor de la producción minera entre 2005 y 2010, durante el apogeo del auge de las materias primas.

Políticas similares se aplicaron en Colombia, donde el código minero de 2001 declaró la minería una actividad de interés público, se levantaron las restricciones sobre las áreas protegidas, se redujeron los impuestos a las empresas mineras y se liquidó la empresa minera del Estado (Sankey, 2014: 123). Según Gudynas (2010), Colombia y México son ejemplos del "extractivismo clásico", en el que se facilita a las empresas privadas y extranjeras el acceso a las reservas minerales, a mano de obra barata y a bajos tipos impositivos, lo que limita la capacidad del Estado para captar rentas. Por el contrario, allí donde los Gobiernos progresistas han llegado al poder, en especial en Bolivia, Ecuador y Venezuela, el Estado ha impuesto mayores controles normativos, impuestos y regalías a las empresas de propiedad extranjera y, al mismo tiempo, ha utilizado a las empresas estatales para captar directamente la renta para el gasto público (Gudynas, 2010). Esta es la esencia del "nuevo extractivismo" mencionado antes. En esta línea, el Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto anunció en diciembre de 2013 la imposición de regalías equivalentes a 7.5% de los ingresos netos de las actividades mineras, más otro 0.5% sobre la venta de oro, plata y platino. Esto, en relación con los mecanismos para canalizar el dinero recaudado de estas regalías a los municipios y estados donde se concentra la actividad minera, para ser utilizado en la financiación de proyectos de desarrollo social y sostenible.

En una revisión de más de doscientos textos académicos que tratan sobre las comunidades que se resisten a los proyectos mineros en todo el mundo, Conde (2017) observa que los movimientos de resistencia tienden a surgir debido a la confluencia de cuatro grandes fuerzas:

- Los impactos socioambientales sobre la tierra, el agua y los medios de subsistencia.
- La falta de oportunidades de las comunidades locales que viven cerca de los proyectos mineros para participar de forma significativa en las decisiones que afectan sus vidas.
- La falta de confianza en las empresas y organismos gubernamentales que promueven proyectos mineros a gran escala.
- Una compensación monetaria insuficiente por la pérdida de tierras y recursos.

Conde señala que "algunos grupos crean alternativas basadas en una defensa de la diferencia cultural y de los conocimientos locales vinculados al lugar, a la valoración de los medios de vida locales" (2017: 83). Estas alternativas se vinculan a visiones más amplias del posdesarrollo, en particular la filosofía indígena del "vivir bien" en la región andina de Sudamérica. Asimismo, en México, las visiones alternativas del desarrollo que han surgido de los movimientos contra la minería y otros conflictos sociales ambientales se han vinculado a cosmologías indígenas (Toledo, 2015: 119-134), incluida la filosofía de *la comunalidad* manifiesta en las formas tradicionales de gobierno y acción colectiva en las comunidades zapotecas de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca (Fuente y Barkin, 2013).

En un plano más abstracto, muchos estudiosos críticos han recurrido a la teoría del "nuevo imperialismo" de Harvey (2003) para explicar el aumento del número de conflictos sociales ambientales en torno a las actividades mineras desde el cambio de siglo, sobre todo en África y América Latina (Sacher, 2016).[6] Este modelo considera la "acumulación por desposesión" como un proceso que ha cobrado impulso en la época actual,

6 N. de T.: Se advierte una discrepancia entre la fecha consignada en esta cita y la registrada en la lista de referencias bibliográficas.

en unas condiciones estructurales caracterizadas por la libre movilidad del capital, que da lugar a la reconfiguración de las luchas de clases, por la que los grupos campesinos e indígenas han surgido en América Latina como los principales protagonistas de la clase popular en la defensa y la recreación de los bienes comunales. Si bien reconocemos que este modelo proporciona una poderosa narrativa para comprender de forma crítica las fuerzas estructurales en juego en la movilización de la resistencia al capital minero, no explica por qué la resistencia a los proyectos de megaminería surge en algunos contextos locales y no en otros. En México, según el inventario elaborado por Pérez Jiménez (2014), solo 7.4% de los 1 112 proyectos mineros registrados en el país en 2014 se han enfrentado a una resistencia organizada de base territorial. Esto indica que las luchas contra los grandes proyectos mineros no surgen de forma automática como "dobles movimientos" polanyianos para enfrentar el despojo, lo que a su vez sugiere la necesidad de problematizar la formación de iniciativas colectivas de resistencia, investigar casos de lucha sostenida local y compararlos con casos de "no conflicto" o "conflicto de baja intensidad" (Gudynas, 2014; Madrigal, 2014).

Tres ópticas para interpretar la resistencia a la minería

Dentro de los campos de la ecología política y los estudios críticos del desarrollo podemos discernir tres enfoques que se solapan en parte, y en parte compiten, para explicar la resistencia colectiva a los megaproyectos mineros en América Latina:

En primer lugar, la *lucha de clases*, no tanto en los términos clásicos de las relaciones capital-trabajo, que corresponde al ámbito de la acumulación mediante la reproducción ampliada, sino más bien en relación con la desposesión de la tierra, el agua, el territorio, los entornos vitales sanos y el territorio culturalmente significativo.

En segundo lugar, los *conflictos de distribución ecológica*, en referencia a la injusta distribución de los impactos ambientales que se derivan del creciente metabolismo social de las economías industriales.

En tercer lugar, las *inconmensurables valoraciones culturales* de los entornos naturales y artificiales de territorios específicos.

En esta sección se evalúa la pertinencia de cada uno de estos enfoques para analizar el movimiento de resistencia contra la Minera San Xavier (msx) en el estado de San Luis Potosí.

Lucha de clases

El nuevo imperialismo, tal como lo teoriza David Harvey, se caracteriza por una nueva ronda de "cercamiento de los bienes comunales", en virtud de la cual los bienes en posesión del Estado o en común son "liberados al mercado, donde el capital sobreacumulador puede invertir en ellos, mejorarlos y especular con ellos" (2003: 158). En el centro de esta explicación se encuentra el concepto de "acumulación por desposesión", que se inspira en la teoría de la acumulación originaria de Marx. Este concepto implica la existencia de una forma de lucha de clases librada desde arriba. En esta línea, la agenda neoliberal promovida por Washington a partir de la década de los ochenta se ha caracterizado como un proyecto político de las clases dominantes de los países capitalistas avanzados —en particular Estados Unidos— para restaurar o reconstruir el poder de las élites económicas (cf. Gordon y Webber, 2016: 11; Harvey, 2005: 19).

Al aplicar esta óptica al análisis de los conflictos en torno al extractivismo, diferentes autores atribuyen diversos grados de importancia a los factores externos y a las intervenciones imperialistas frente a los internos asociados a la lucha de clases a escala nacional. Sankey, por ejemplo, sostiene que estas luchas se entienden mejor "como el producto de evoluciones en la trayectoria histórica de las luchas de clases, que tienen lugar principalmente en contextos nacionales", en lugar de "movimientos enfrentados al capital canadiense, como querrían Gordon y Webber" (2014: 117). Del mismo modo, Chiasson-LeBel, en un análisis del neoextractivismo en Venezuela y Ecuador, desarrolla un enfoque que se centra "en cómo la evolución de las relaciones de clase y las luchas de clases en cada país han influido en el papel desempeñado por el sector extractivo" (2016: 890). En su análisis, las clases se definen

unas en relación con otras dentro de un sistema de producción dado, a partir de procesos de lucha, en la tradición de E.P. Thompson.

Veltmeyer y Petras (2014) observan que en América Latina los agentes clave implicados en los movimientos de resistencia a las incursiones del capital en la explotación de los recursos naturales son predominantemente las comunidades campesinas e indígenas, en alianza con diversos grupos de la sociedad civil. Los mismos autores proponen que, bajo las condiciones estructurales definidas por el post-Consenso de Washington, el locus de la lucha de clases en la región se ha desplazado desde la década de los noventa de los trabajadores industriales sindicalizados a "las comunidades adyacentes a los sitios de explotación corporativa agrominera" (Petras y Veltmeyer, 2018, 4). Se observa que estas comunidades están "resistiendo al despojo, protestando contra las operaciones destructivas del capital extractivo sobre los medios de subsistencia y el ambiente, y reclamando sus derechos territoriales, así como el derecho a disfrutar de los bienes comunales del agua, la tierra y la riqueza de los recursos naturales" (2018: 4). A partir de esta lectura, podemos extrapolar que este cambio corresponde a un realineamiento de las fuerzas de la lucha de clases desde abajo, pasando del ámbito de la reproducción ampliada al de la desposesión.

Como tendencia general, este marco encuentra confirmación empírica en la experiencia de la lucha de clases en el sector minero de México, donde durante la era neoliberal los mineros sindicalizados han sido puestos a la defensiva, mientras que los movimientos comunitarios antimineros han tomado la ofensiva y organizado redes de resistencia a múltiples escalas. Se ha reprimido a los mineros en huelga, se ha perseguido a los líderes sindicales combativos, se han desregulado los contratos colectivos de trabajo y el Gobierno federal ha tolerado y fomentado la formación de sindicatos ficticios controlados por la gerencia (Tetreault, 2014). Todo ello ha socavado el sistema político corporativista que reguló las demandas de los mineros sindicalizados durante los 71 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, la segmentación laboral divide a los trabajadores con contratos "permanentes" de los "temporales", siendo estos últimos los que suelen ofrecerse a la población local para construir infraestructuras y prestar servicios (Garibay, 2010; Garibay *et al*., 2011).

El número de luchas de base territorial contra los megaproyectos mineros en México comenzó a aumentar rápido a partir de 2005, en el contexto del aumento de los precios mundiales del oro (Pérez, 2014: 104). Amenazadas con el cercamiento de elementos del entorno natural que sustentan la vida y las actividades reproductivas de las poblaciones cercanas, estas luchas suelen estar protagonizadas por campesinos y grupos indígenas. En el inventario elaborado por Pérez Jiménez (2014: 115), un tercio de los conflictos mineros en México involucran a grupos indígenas, que apelan en el frente legal de sus luchas al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en 2007 (y que incluye a México como signatario) por el derecho a una consulta libre, previa e informada. Este se viola de forma sistemática en México por parte de la Secretaría de Economía en su proceso de otorgamiento de concesiones mineras (López y Galicia, 2011).

En cuanto a las relaciones objetivas de la base popular de resistencia a los medios de producción, la lucha contra la msx es una excepción, ya que, como veremos, la oposición comunitaria no puede caracterizarse en estos términos como campesina, y mucho menos indígena. Además, la proximidad de la mina a la ciudad de San Luis Potosí —a unos 20 km del centro de la ciudad y a solo 8 km de su extremo nororiental— significa que la población directamente afectada incluye a los 1.1 millones de habitantes de la zona metropolitana cuyo suministro de agua está amenazado por la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos. La resistencia urbana reúne a organizaciones ecologistas de la sociedad civil, grupos de investigadores críticos y jóvenes activistas organizados en colectivos. En este sentido, el movimiento de resistencia a la msx es representativo de la tendencia de las personas directamente afectadas por proyectos mineros a gran escala a formar organizaciones comunitarias y a establecer alianzas con diversas organizaciones de la sociedad civil de base urbana, así como a participar en la creación y el funcionamiento de organizaciones en red que operan a escala nacional. No es sorprendente que esta dinámica organizativa reúna a poblaciones afectadas y activistas con diversas relaciones con el sistema dominante de producción económica, lo que lleva a algunos observadores a sugerir que se trata de movimientos multiclasistas (cf. Svampa, 2015: 3).

Conflictos de distribución ecológica

Considerar las luchas contra los proyectos extractivos como "conflictos de distribución ecológica" se relaciona de forma estrecha con el trabajo de Joan Martínez Alier, que acuñó el término en un trabajo seminal con Martin O'Connor en 1996. Martínez Alier y sus colaboradores definen los conflictos de distribución ecológica como "luchas por las cargas de la contaminación o por los sacrificios realizados para extraer recursos" (2010: 154). Las causas estructurales de estos conflictos se sitúan en los cambios en el metabolismo social de las economías industriales expresados en el aumento de los flujos de materiales y energía, cuyos impactos ambientales afectan de forma desproporcionada a los sectores marginados de la población. Esto, según Martínez Alier (2002), da lugar en el Sur global al "ecologismo de los pobres", por el que las poblaciones afectadas —prototípicamente campesinos y pueblos indígenas— emprenden luchas para mantener elementos del entorno natural fuera del alcance pleno de las fuerzas del mercado, con el fin de proteger los medios de subsistencia. Su contraparte en el Norte global es el movimiento por la justicia ambiental, que surgió en Estados Unidos a principios de la década de los ochenta en forma de grupos negros, hispanos e indígenas que protestaban contra la contaminación tóxica en sus comunidades o alrededores (Guha y Martínez, 1997). Las luchas por la justicia ambiental conllevan reivindicaciones que van más allá de las cuestiones de distribución material e incluyen una mayor participación en la toma de decisiones y el reconocimiento de las diferencias culturales (Schlosberg, 2007).

Martínez Alier (2002) sugiere que el estudio de los conflictos sobre la distribución ecológica es competencia del campo emergente de la ecología política, así como el estudio de los conflictos sobre la distribución económica corresponde al campo de la economía política. En la práctica, sin embargo, los factores ecológicos y económicos se solapan en el análisis de la ecología política de los conflictos mineros en México y América Latina. Garibay *et al.* (2011), por ejemplo, en un estudio etnográfico del conflicto en torno a la mina Peñasquito de Goldcorp en el estado de Zacatecas, México, ilustran cómo esta corporación canadiense —con el apoyo de organismos estatales clave— estableció una relación con la población

afectada orientada a "llevarse la mayor parte posible de la riqueza y transferir impunemente los costos ambientales y sociales a la población local" (155). Estos costos incluyen la reubicación de asentamientos humanos, la pérdida de tierras agrícolas y ganaderas, el rápido agotamiento de las fuentes de agua subterránea y diversas formas de contaminación tóxica.

La óptica de la distribución ecológica y económica también se ha utilizado para evaluar críticamente los costos de la megaminería a escala nacional en México (cf. Azamar y Ponce, 2014; Pérez, 2014; Quintana, 2014; Tetreault, 2014). Lo que estos estudios tienden a ilustrar es la transferencia de la mayor parte de los beneficios de la extracción de recursos a las empresas mineras transnacionales y a los mercados financieros globales, y la concentración de los costos sociales y ambientales en las comunidades cercanas a los sitios mineros. Ante esta situación, alrededor de dos tercios de las luchas comunitarias contra la minería en México articulan un enfático "no" a los megaproyectos mineros tóxicos; mientras que el tercio restante busca la redistribución de costos y beneficios, la mitigación de los impactos ambientales más perniciosos y contribuciones más significativas al desarrollo económico y social local (Tetreault, 2014). De las luchas que dicen "no" a la megaminería, 70% giran en torno a proyectos que aún no han entrado en la fase de producción. Evidentemente, la fase de un proyecto determinado condiciona las opciones de que disponen los movimientos de oposición.

Valoraciones culturales inconmensurables

El estudio de los conflictos mineros a través de las ópticas de la distribución ecológica implica, en última instancia, ir más allá del análisis convencional de costos y beneficios al reconocer las dificultades que plantean los intentos de asignar un valor monetario a los elementos del entorno natural, así como la inconmensurabilidad de los distintos "lenguajes de valoración" (Barkin *et al*., 2012; Martínez, 2002; Martínez *et al*., 2010; Svampa, 2015). Según Escobar (2006), los lenguajes de valoración localmente específicos se derivan de factores culturales y de las relaciones interactivas que las comunidades mantienen con los ecosistemas y los entornos de origen humano que han conformado a lo largo de la historia. Desde este punto de vista, la diversidad biocultural

se traduce en múltiples y distintos lenguajes de valoración que "contrastan notablemente con la forma más comúnmente aceptada de ver la naturaleza como un recurso externo a los humanos y de la que los seres humanos pueden apropiarse como les parezca" (Escobar, 2006: 9). A través de la óptica de las valoraciones culturales inconmensurables, el imperialismo es visto como una forma de neocolonialismo, donde las características biofísicas y las configuraciones territoriales de los espacios locales de América Latina "aparecen ante el pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la región como un espacio subalterno, que puede ser explotado, devastado y reconfigurado según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes" (Alimonda, 2011: 22. Cf. Azamar, 2015 en relación con la MSX).

Allí donde surge una resistencia organizada contra los proyectos extractivos, las poblaciones afectadas y sus aliados utilizan el lenguaje para expresar valoraciones no solo en términos materiales de protección de los medios de subsistencia, las tierras agrícolas, las fuentes de agua, las infraestructuras existentes y la salud humana, sino también en términos que destacan la importancia simbólica de los paisajes, el patrimonio arquitectónico y las culturas locales. Estas valoraciones desde el plano local chocan con las de búsqueda de beneficios del capital extractivo y las de costo-beneficio del Estado, lo cual da lugar a luchas sobre la importancia simbólica de los territorios afectados y su vocación productiva y social. Porto Gonçalves (2001) considera estos conflictos como "tensiones territoriales" entre las visiones convencionales del desarrollo dirigido por el Estado y el mercado, y las de los habitantes locales cuyas "territorialidades" socialmente construidas se basan en actividades agrícolas y forestales de subsistencia. Bebbington (2011: 63), con la vista puesta en las actividades mineras en Sudamérica, habla de "conflictos sobre la producción de territorios" y "sobre qué tipo de relación entre sociedad y ambiente debe predominar en un territorio". En palabras de Svampa (2015: 56):

> La lógica territorial de las corporaciones y las elites económicas se enmarca en un paradigma economicista de producción de mercancías que destaca la importancia de transformar los espacios en los que se encuentran los bienes naturales en territorios eficientes y productivos. La lógica estatal,

> en sus diferentes niveles, se enmarca normalmente en un espacio de geometría variable que intenta articular la visión de los bienes naturales como mercancías y, al mismo tiempo, como recursos naturales estratégicos (una visión vinculada al control estatal del beneficio extractivista). Esto evita cualquier consideración que incluya —como proponen los movimientos sociales, las organizaciones indígenas y los intelectuales críticos— una perspectiva que los entienda en términos de bienes comunales.

Como se expone más adelante, en el caso del conflicto en torno a la msx, el movimiento de resistencia de Cerro de San Pedro ha hecho hincapié en la importancia histórica y simbólica de las colinas y los edificios destruidos por la mina de oro a cielo abierto de New Gold (antes Metallica Resources). También ha llamado la atención sobre los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana que suponen la lixiviación con cianuro y el agotamiento de los acuíferos, y ha proyectado una visión alternativa del desarrollo local basada en el turismo comunitario. Este "lenguaje de valoración" contrasta con el de los promotores del proyecto minero, que destacan la creación de puestos de trabajo en el sector formal y los beneficios económicos que se espera derramen las grandes sumas de ied (Azamar, 2015; Lamberti, 2011; Madrigal, 2009). La primera valoración descansa en el arraigo de la población local en un territorio históricamente significativo; la segunda sustituye este arraigo por la lógica del crecimiento económico y las relaciones laborales capitalistas que implican movilidad laboral y "desterritorialización" (Pánico y Garibay, 2011).

Una historia de lucha en Cerro de San Pedro[7]

La Minera San Xavier (msx) se encuentra en el municipio de Cerro de San Pedro, a pocos kilómetros del extremo noreste de la ciudad de San Luis Potosí. En la actualidad, un gigantesco cráter ocupa el lugar donde los explo-

7 El análisis presentado en esta sección y en la siguiente se basa en una amplia revisión de la literatura académica y periodística que trata el conflicto en torno a la Minera San Xavier, así como en una investigación de campo realizada en 2017, que incluyó visitas a múltiples lugares del municipio de Cerro de San Pedro y entrevistas con líderes de la oposición, investigadores y representantes de New Gold.

radores españoles descubrieron ricos yacimientos de plata y oro a finales del siglo xvi. Los yacimientos minerales de Cerro de San Pedro proporcionaron la base económica para el establecimiento de un enclave minero en 1592, considerado el origen de la ciudad de San Luis Potosí. Por esta razón, una imagen de la colina que ahora ha sido demolida por la mina a cielo abierto de New Gold aparece en el escudo de armas del estado.

Durante el periodo colonial, se establecieron haciendas en las poblaciones cercanas con el fin de fundir el mineral, mientras se utilizaba mano de obra indígena forzada y asalariada para llevar a cabo las actividades mineras subterráneas, caracterizadas por ciclos de auge y caída que continuaron en el siglo XIX (Azamar, 2015; Gámez, 2008; Martínez *et al*., 2010). La minería industrial subterránea a mayor escala comenzó en Cerro de San Pedro en 1891, cuando se otorgó una concesión minera a la Compañía Metalúrgica Mexicana, fundada por el empresario estadounidense Robert Saffort Towne (Azamar, 2015: 55). Las actividades mineras continuaron durante los tumultuosos años de la Revolución mexicana (1910-1920), a pesar de las huelgas llevadas a cabo por los mineros locales durante los primeros años de la Revolución (Gámez, 2008: 34-37).

A principios de la década de los veinte , los habitantes de Cerro de San Pedro se organizaron para solicitar la redistribución de tierras para la ganadería y la agricultura de subsistencia, de acuerdo con las disposiciones para la reforma agraria incorporadas en el artículo 27 de la Constitución de 1917. En 1923, la American Smelting and Refining Company (Asarco) se fusionó con la Mexican Metallurgical Company y la absorbió. Para entonces, casi seis mil hectáreas —equivalentes a casi la mitad de la superficie del municipio, muy pocas de ellas cultivables— ya habían sido redistribuidas en forma de ejidos a 376 hombres cabeza de familia, que utilizarían la tierra en los años siguientes para el pastoreo de ganado ovino, caprino y bovino (Martínez *et al*., 2010: 223-225).

La agitación laboral continuó durante los años siguientes en el contexto de un proceso de renovación tecnológica, y los mineros exigían condiciones de trabajo más seguras e indemnizaciones por despidos injustificados (Martínez *et al*. 2010: 42), así como aumentos salariales. Al final, los mineros de

Cerro de San Pedro se organizaron en la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (sntmmsrm), que formaba parte de la estructura corporativista de sindicatos dentro de los pliegues del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En los primeros meses de 1948, comenzó a gestarse un conflicto laboral en el que mineros de la Sección 7 del sntmmsrm amenazaron con estallar una huelga en solidaridad con otras secciones del mismo sindicato en el ámbito nacional, en demanda de mejores salarios. En este contexto, en marzo del mismo año, un incendio destruyó partes de la mina subterránea de la Asarco en Cerro de San Pedro. Los mineros afectados acusaron a la empresa de haber provocado el incendio de forma deliberada como táctica para perturbar las negociaciones y como pretexto para no poder satisfacer las demandas de los trabajadores. En cualquier caso, la mina fue cerrada tras el incendio, y cientos de mineros se quedaron sin trabajo.

Esto provocó un rápido descenso de la población local, ya que los trabajadores mineros y sus familias emigraron en busca de trabajo a la ciudad de San Luis Potosí, a los distritos mineros cercanos y a otros lugares (Gámez, 2008; Martínez *et al*., 2010; Peña y Herrera, 2008; Ortiz, 2009). En 1952, solo quedaban 258 habitantes en la ciudad de San Pedro, frente a los 1 757 de 1940 (Gámez, 2008: 51). Los que subsistían apenas como mineros artesanales, conocidos como gambusinos, o realizando actividades ganaderas y agrícolas de subsistencia, que alcanzaron su culmen alrededor de 1960 y disminuyeron de forma gradual a partir de entonces. Los mineros artesanales locales se organizaron en una cooperativa en 1952 para negociar acuerdos de alquiler con la fragmentación de la propiedad de las concesiones mineras en Cerro de San Pedro, pero esta organización desapareció después de 1974 (Martínez *et al*., 2010: 219). La exploración minera continuó en los años setenta y ochenta, sin traducirse en la realización de un proyecto a gran escala.

Para la década de los ochenta, el ejido de Cerro de San Pedro estaba inactivo como asamblea colectiva, con 90% de los titulares de derechos ejidales fallecidos o ausentes de la comunidad (Ortiz, 2009: 122). En febrero de 1988, dos campesinos locales iniciaron un proceso legal para obtener derechos ejidales sobre la tierra que trabajaban, pero esta petición se estancó, lo cual

dejó una situación agraria legalmente borrosa en Cerro de San Pedro, que sería aprovechada por Metallica Resources.

Durante la segunda mitad del siglo XX, mientras la población de la ciudad de San Luis Potosí crecía rápido, la del pueblo de San Pedro seguía disminuyendo, de modo que en 1990 solo quedaban 139 habitantes. Muchos más, sin embargo, mantenían vínculos activos con la comunidad. Como explican Peña y Herrera (2008: 127):

> La mayoría [de los migrantes de Cerro de San Pedro] buscaron su buena fortuna en la ciudad de San Luis Potosí. Al principio, iban y venían diariamente para trabajar y estudiar en la ciudad [...] Con el tiempo, casi todos ellos decidieron establecer su residencia en la capital, mientras mantenían una casa en Cerro de San Pedro como segunda residencia o lugar para los fines de semana.

Esta dinámica se prestó a la idea de organizar un turismo comunitario en Cerro de San Pedro, estableciendo restaurantes y hoteles y atrayendo visitantes a la localidad los fines de semana mediante la promoción de su importancia histórica y sus pintorescas infraestructuras y alrededores. A mediados de la década de los noventa, antes del anuncio de la MSX, se inició este proyecto de base al conformarse el Consejo de Representantes del Municipio de San Pedro, una organización que comenzó a sondear las necesidades locales y a solicitar a los organismos gubernamentales la prestación de mejores servicios en las áreas de agua, electricidad e infraestructura vial. Mario Martínez, uno de los líderes de este proyecto, que más tarde se convirtió en líder local de la oposición a la mina, explica cómo funcionaba este consejo:

> No verticalmente, sino con un representante de cada comunidad para este consejo, una junta, digamos [...] para mejorar el municipio, no solo el centro administrativo, y generar turismo, darle entusiasmo a las comunidades como esta para que la gente lo reconozca y tenga alguna forma de mantenerse económicamente (entrevista, 21/02/2017).

El proyecto de turismo comunitario encajaba con un decreto emitido en septiembre de 1993 por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por el que se

establecía que tres cuartas partes del municipio de Cerro de San Pedro debían dedicarse a la restauración de la vida salvaje, como parte del Plan de Legislación Ecológica para la capital y sus alrededores. El plan subrayaba la baja disponibilidad de agua como un problema fundamental para el desarrollo de la ciudad y establecía la necesidad de conservar las zonas de recarga de acuíferos y la priorización de actividades económicas que no contaminaran ni consumieran grandes cantidades de agua (Santacruz, 2008: 110-111).

A pesar de estas preocupaciones ambientales, en el contexto del tlcan y con el respaldo de la Ley Minera de 1992, la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras en el municipio de Cerro de San Pedro a la empresa minera Metallica Resources, con sede en Canadá, por medio de su filial Minera San Xavier, que inició actividades de exploración en la zona en 1995. El conflicto, que se analiza en detalle en la siguiente sección, estalló al año siguiente, cuando la empresa minera anunció sus planes de crear una gigantesca mina a cielo abierto que en un principio implicaba la reubicación del pueblo de San Pedro.

Antes de que estallara el conflicto, la empresa minera ya había conseguido un contrato de arrendamiento con el ejido de Cerro de San Pedro, firmado el 11 de marzo de 1996 por residentes locales que no tenían derechos ejidales para actuar como representantes del ejido. El contrato se refería a 290 hectáreas de tierra ejidal que se utilizarían para la boca de la mina a cielo abierto y las pilas de estériles durante un periodo de quince años a cambio de 170.000 pesos anuales (Ortiz, 2009: 121-126), equivalentes a unos 21.000 dólares de la época. Se firmaron contratos similares con representantes de los *ejidos* La Zapatilla y Cuesta de Campa, en el municipio de Cerro de San Pedro, y del ejido Palma de la Cruz, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La lucha contra la mina de San Xavier

Esta sección analiza el nacimiento y la evolución de la resistencia organizada contra la Minera San Xavier a través de las tres ópticas esbozadas con anterioridad: valoraciones culturales inconmensurables, distribución ecológica y lucha de clases. Estas ópticas se presentan de acuerdo con la aparición cronológica de tres momentos analíticamente distintos pero superpuestos en las acciones

y el énfasis discursivo del movimiento de resistencia en diferentes etapas del ciclo de vida de la Minera San Xavier. Primero, el surgimiento de la resistencia local, poco después de que se anunciara el proyecto, con énfasis en el significado histórico y cultural del patrimonio natural y arquitectónico de Cerro de San Pedro. Segundo, la formación de una alianza con grupos ecologistas de la ciudad de slp, que asumieron un papel de liderazgo en la impugnación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto y en la denuncia de sus impactos ecológicos y riesgos para la salud, y tercero, la creación del Frente Amplio Opositor (fao), que ha reunido a diversas organizaciones de San Luis que se oponen a la mina, para construir alianzas y, a la postre, redes para coordinar acciones de protesta y exigencia en los planos nacional e internacional.

Valoraciones alternativas del patrimonio natural y arquitectónico de CSP

A principios de 1996, el Consejo de Representantes de Cerro de San Pedro fue alertado por un representante local del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre los planes de demoler el poblado de San Pedro para dar paso a una gigantesca mina de oro a cielo abierto. Según relató Mario Martínez en una entrevista reproducida por Ortiz (2009: 16-17), los miembros de este consejo estaban al tanto de las actividades de exploración que desde el año anterior realizaba Metallica Resources, pero no esperaban que llegaran a mucho, ya que varias empresas mineras habían ido y venido con estudios de la zona desde principios de los años setenta. La alerta del delegado estatal del inah, por medio de canales informales, los llevó a investigar más a fondo el proyecto, y en julio de 1996, a constituir formalmente una organización con fines de resistencia: la Junta de Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de Cerro de San Pedro.

El 10 de septiembre de 1996 se celebró una reunión en la iglesia de San Nicolás, en San Pedro, organizada para dar a los representantes de la empresa minera la oportunidad de presentar su proyecto y sus propuestas en público. Según diversos testimonios (Lamberti, 2011: 327-328; Madrigal, 2009: 182-183; Ortiz, 2009: 17- 19; Peña y Herrera, 2008: 134-135), este acontecimiento marcó el inicio de la resistencia popular a la msx. Los lugareños presentes se enfadaron cuando, en respuesta a sus preguntas, se enteraron de que la

propuesta implicaba la venta de sus propiedades y su traslado a otro lugar, así como la destrucción de la iglesia y otros edificios históricos. Más aún cuando un representante de la empresa aclaró que habían venido a ayudar, y que en ese sentido ya habían entregado dinero al párroco y al presidente municipal.

Como su nombre indica, al principio, cuando surgió la resistencia organizada, la junta hizo hincapié en el valor simbólico del patrimonio cultural e histórico del municipio. En el municipio de Cerro de San Pedro existen 85 edificios construidos entre los siglos XVIII y XIX, entre ellos la iglesia de San Nicolás Tolentino y el templo parroquial de San Pedro. Estos edificios fueron salvados de la destrucción por el movimiento de resistencia y por las medidas tomadas por el inah; a diferencia de la Casa de Guadalupe, una hacienda centenaria en el pueblo cercano de La Zapotilla, que fue demolida para dar cabida a las pilas de lixiviación de la mina (Madrigal, 2014). Este patrimonio arquitectónico y el paisaje montañoso y árido en el que se encuentra constituyen la base material de una identidad colectiva vinculada históricamente a la minería y a la ganadería minifundista (Schiaffini, 2011). Como han señalado repetidas veces los representantes del movimiento de resistencia, los edificios y el paisaje tienen un significado simbólico que va más allá de las personas que viven o tienen raíces familiares en Cerro de San Pedro para incluir a un nivel más amplio el imaginario asociado a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí.

Riesgos y costos ambientales

"Las preocupaciones ambientales no estaban presentes al principio del movimiento", explica David Madrigal, cuya tesis doctoral (2009) analizó el conflicto en torno a la msx desde una perspectiva constructivista social. "La gente no se preguntaba: '¿qué va a pasar con el medio ambiente?' [...] Era más bien: '¿Qué va a pasar? Van a destruir la iglesia; van a destruir el pueblo. Mis abuelos nacieron aquí'" (entrevista, 22/02/2017). Sin embargo, los opositores a la msx basados en Cerro de San Pedro no tardaron en formar una alianza con grupos ecologistas con sede en la ciudad de San Luis Potosí, entre ellos Pro-San Luis Ecológico, una organización no gubernamental (ONG) fundada

en 1993 en el contexto de una lucha contra la creación de una instalación de residuos peligrosos en el municipio de Guadalcázar.

La lucha contra la instalación de esta planta fue un antecedente importante de la lucha contra la msx no solo por la formación política de grupos y líderes ecologistas en la ciudad de San Luis Potosí, sino también porque sirvió como punto de referencia de lo que estaba en juego en el caso de bloquear un proyecto de este tipo en el contexto del tlcan. Después de que estos grupos lograran impedir que Metalclad, con sede en Estados Unidos, construyera las instalaciones, la empresa demandó al Gobierno mexicano en virtud de las disposiciones del Capítulo 11 del tlcan y acabó ganando un pago de 16.7 millones de dólares. Este episodio se mencionó en repetidas ocasiones por parte de Jesús Marcelo de los Santos Fraga, gobernador de San Luis Potosí entre 2003 y 2009, en sus exhortaciones públicas para eliminar las barreras a la operación de la MSX.

En agosto de 1996, Pro-San Luis Ecológico solicitó un informe sobre el avance del estudio de riesgo ambiental que se realizaba para la mina propuesta por Metallica. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (lgeepa), modificada en diciembre del mismo año, obligaba a las empresas mineras a elaborar dicho estudio y a obtener su aprobación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), como condición para realizar actividades de extracción y refinación en México. El contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero y la modalidad en que al final se le presentó a la Semarnat, el 16 de octubre de 1997 (en un formato general y no en el específico que exige la ley para los proyectos mineros), servirían a la postre como fundamento para impugnar el proyecto, en lo que entonces era el aún inexplorado territorio jurídico de la recién diseñada legislación ambiental.

Brevemente, los principales impactos ambientales del proyecto, tal como se esbozan en la mia original, incluyen, para empezar, la demolición de la colina histórica representada en el escudo de San Luis Potosí para dejar un cráter de 1 600 hectáreas a solo unos metros de la plaza principal del poblado de Cerro de San Pedro, así como 117 millones de toneladas de roca estéril. La mia estima que, de este material, 600.000 toneladas contendrían

minerales sulfurados, "con el riesgo de generar, a largo plazo y durante el periodo de oxidación completa del azufre, soluciones con un pH ácido que [podrían] contener metales en disolución y afectar a los acuíferos de la región" (en Santacruz, 2008: 111). El peligro de contaminación del agua no sólo derivaba del drenaje ácido, sino también del uso de al menos tres toneladas diarias de cianuro de sodio en el proceso de lixiviación en pilas.[8] La mia indicó que todo el proceso se llevaría a cabo en un circuito cerrado que evitara fugas y vertidos. Sin embargo, en mayo de 2014 unas lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de la balsa de estériles de la mina, algo que, según los lugareños, ya había ocurrido antes (Madrigal, 2019). También existía el riesgo, previsto y minimizado en la mia original, de que el cianuro acabara contaminando los suministros de agua subterránea. Además, el proceso de lixiviación empleado por la msx, que ahora se encuentra en su etapa final, consume un millón de metros cúbicos de agua al año, lo que aumenta la presión sobre el ya sobreexplotado acuífero que abastece a la ciudad de San Luis Potosí.[9] Por último, cabe mencionar que se esperaba que el proyecto tuviera un impacto adverso en la flora y la fauna locales, incluidas las especies endémicas y en peligro de extinción; y los lugareños han informado de que algunas especies han desaparecido desde que comenzaron las actividades de extracción (Cortés *et al*., 2016).

Mientras el movimiento opositor denunciaba los riesgos ambientales del proyecto, la filial de Metallica Resources aseguraba que utilizaría tecnología de punta para minimizarlos. En busca de una solución política, el gobernador de San Luis Potosí entre 1997 y 2003, Fernando Silva Nieto, pidió a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que reuniera a un grupo de expertos para elaborar un dictamen técnico. Eso fue en mayo de 1998. En los meses siguientes, "nació una desconfianza respecto a la

8 La mia original indicaba que el uso diario de cianuro de sodio sería de dieciséis toneladas. Esta cifra se ajustó a tres toneladas diarias en la autorización concedida por la Semarnat en abril de 2006.

9 Aunque en un principio Metallica Resources se planteó utilizar aguas residuales tratadas, acabó solicitando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que autorizara la compra de derechos de explotación del acuífero que abastece a la ciudad de San Luis Potosí. Este acuífero sufre un sobregiro estimado en 35.4 millones de metros cúbicos al año y, al descender el nivel freático, aumentan las concentraciones de minerales, con niveles de flúor ya por encima del máximo permitido para consumo humano por la Ley de Aguas Nacionales (Peña, 2012: 143-157).

opinión científica local, entre otras razones, porque algunos de los investigadores de la universidad fueron identificados como defensores de los intereses del Gobierno estatal y de los empresarios" (Madrigal, 2009: 156). En diciembre de 1998 se hizo público el estudio de la Universidad, en el que se esbozaban una serie de recomendaciones para minimizar ciertos impactos ambientales y fomentar la transparencia y la participación en un proceso de seguimiento sugerido. Dos meses después, el 26 de febrero de 1999, el Instituto Nacional de Ecología (ine), dependiente de la Semarnat Ministerio, concedió un permiso condicional para el funcionamiento de la msx donde estableció cien condiciones extraídas directamente del dictamen técnico de la Universidad.

Representantes de Pro-San Luis Ecológico impugnaron la legalidad de la autorización otorgada por la Semarnat. Esto se hizo primero mediante un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), y luego por un juicio conocido en México como *amparo*, que busca la protección de derechos constitucionales. El 23 de junio de 2004, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una sentencia que anuló el permiso que el ine había otorgado a Minera San Xavier en 1999. Esta sentencia la ratificó el TFJFA el 1.o de septiembre de 2005. Sin embargo, la minera afectada apeló esta sentencia y consiguió que se anulara, con el efecto de devolver el asunto a la Semarnat. El 10 de abril de 2006, dicha Secretaría emitió un nuevo permiso condicionado para la MSX, argumentando que sus actividades no eran "industriales", sino extractivas, con el fin de eludir las estipulaciones incluidas en el Plan de Legislación Ecológica de 1993, que prohibía las actividades industriales en el municipio de Cerro de San Pedro.

El Frente Amplio Opositor continuó su campaña de oposición a la minera por motivos ambientales tras el inicio de las actividades extractivas en 2007, pero con un efecto limitado, dado el poder de las fuerzas a las que se enfrentaba. Desde la perspectiva analítica adoptada en este estudio, lo interesante es que los términos de la oposición evolucionaron desde las preocupaciones ambientales iniciales señaladas con anterioridad, que siguen vigentes, hasta incluir ahora los desafíos a la afirmación de New Gold de que es posible "rehabilitar" el cráter del emplazamiento minero

tras el cierre programado de la mina. La afirmación de la empresa de que el terreno puede rehabilitarse con la plantación de cactus autóctonos y otra flora se ha impugnado por insuficiente, y la imposibilidad de restaurar el terreno en el emplazamiento real de la mina se ha puesto de relieve como parte de la oposición en curso.

Formación de la clase política

En mayo de 2002, tres descendientes de los titulares originales de los derechos ejidales de Cerro de San Pedro registraron un proceso legal para anular el contrato de arrendamiento de tierras que se firmó el 11 de marzo de 1996 entre los representantes legales de la msx y los representantes apócrifos del ejido de Cerro de San Pedro. Dos años después, el Tribunal Unitario Agrario declaró el contrato "nulo de pleno derecho", ya que había sido firmado por representantes ilegítimos del ejido. Pero el proceso judicial no terminó ahí. Los afectados apelaron y ganaron una sentencia el 9 de septiembre de 2005 para revocar el primer fallo, basándose en el argumento de que quienes impugnaron la legalidad del contrato aún no estaban técnicamente reconocidos por las autoridades agrarias como ejidatarios. Desde entonces, a ambos grupos se les han reconocido sus derechos ejidales (Cortés *et al*., 2016), mientras la batalla legal en este frente sigue su curso.

Como señalan Composto y Navarro (2015: 8), la "defensa de la tierra y de la propiedad colectiva" constituye un tercer "eje articulador" de la lucha contra la msx, junto con "la protección del patrimonio histórico y cultural y del medio ambiente". Sin embargo, como ya se ha mencionado, la base del movimiento contra la mina no puede caracterizarse en términos objetivos de clase como "campesina". El movimiento es, más bien, una alianza multiclasista con relaciones variadas con los medios de producción entre sus miembros de base. Esta base incluye no solo a los habitantes locales que se oponen a la mina, sino también a los miembros de grupos y organizaciones con sede en la ciudad de San Luis Potosí que también se han movilizado y han participado en diversas formas de protesta. Estos grupos incluyen organizaciones ecologistas, colectivos

juveniles, sectores progresistas de la Iglesia católica y simpatizantes del movimiento zapatista; diecisiete organizaciones en total. Entre 2003 y 2004, el Frente Amplio Opositor (FAO) surgió como una organización que aglutinaba a estos grupos en oposición a la msx, uniendo así en la lucha a personas con diversos medios de vida. Por ejemplo, habitantes de Cerro de San Pedro que obtienen sus ingresos del trabajo en la ciudad, de la agricultura a pequeña escala o de la minería artesanal; y en la ciudad de San Luis Potosí, investigadores profesionales, abogados, estudiantes, obreros, pensionistas, artistas, etcétera.

Sin duda, "una de las debilidades del fao es que nunca alcanza un carácter masivo", como lo demuestra el número relativamente bajo de personas que participaron en una de las mayores marchas de protesta del movimiento en la ciudad de San Luis Potosí en marzo de 2006: unas 2.000 (Ortiz, 2009, p. 192). Es más, "en la práctica, un pequeño grupo es el que decide qué acciones emprender, el que moviliza y sobre cuyos hombros recaen las victorias y los errores del movimiento opositor" (2009: 67).

Otra salvedad es que la oposición comunitaria a la mina en Cerro de San Pedro disminuyó con el tiempo. Como explica Ortiz (2009), a mediados de 2004, en el punto más alto de las tensiones por la negativa del Gobierno municipal a aprobar el megaproyecto minero, la filial local de Metallica Resources aumentó su oferta a los habitantes del pueblo de Cerro de San Pedro. Para los propietarios, esto implicaba la oferta de una casa fuera del pueblo y cuatro mil pesos mensuales (unos 208 dólares) durante los nueve años de vida del proyecto; para los no propietarios, una opción era un pago mensual de 2 500 pesos (unos 130 dólares) durante el mismo periodo. "Con esta propuesta, en los meses siguientes, poco a poco, [la empresa minera] logró romper la oposición que existía en el pueblo al proyecto y persuadir a la mayoría de los habitantes de la cabecera municipal para que aceptaran la reubicación o dieran su aprobación para la operación de la mina" (Ortiz, 2009: 153). Esto habla de las condiciones económicas de los habitantes de Cerro de San Pedro, cuya pobreza relativa y falta de oportunidades laborales los hacen susceptibles a la cooptación (Cortés *et al*., 2016), con importantes excepciones, como el líder moral

del movimiento de resistencia, Mario Martínez, quien recibe una modesta pensión de parte de su carrera como ingeniero profesional.

A pesar de estas caracterizaciones y salvedades, desde la perspectiva analítica adoptada en esta investigación, la dinámica organizativa que condujo a la creación y consolidación del fao corresponde a lo que Otero (2004: 41) denomina "formación de clases políticas", definida como "el proceso por el que grupos, clases y comunidades definen sus demandas (u objetos de lucha), construyen organizaciones para defender y promover sus intereses y establecen alianzas con otras organizaciones". Aunque las limitaciones de espacio no permiten un examen detallado de la mediación estatal con el fao, a continuación se ofrece una descripción general de los procesos de afiliación y construcción de alianzas del Frente, así como de algunos momentos clave de la lucha.

Aunque muchas de las organizaciones reunidas por el fao han estado políticamente enfrentadas y divididas, en particular sobre cómo negociar con el Estado y la política electoral, han coincidido en su oposición a la msx y en presentar un frente unido. Como observa Navarro (2015: 195), en esta convergencia "se conjuntaron diversas capacidades sociales para enfrentar el enorme poder de la msx, aprovechando y actualizando la larga experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en San Luis Potosí, del zapatismo y del conocido movimiento navista", en referencia a una lucha de décadas por democratizar el poder estatal en manos del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por un médico y político llamado Salvador Nava Martínez.

El movimiento de resistencia alcanzó su apogeo entre 2005 y 2007, cuando Metallica Resources procedió a la construcción de infraestructuras para preparar el inicio del proceso extractivo a pesar de las continuas batallas legales. Durante este periodo, el fao coordinó múltiples acciones de resistencia y protesta para llamar la atención pública sobre su causa, no solo en San Luis Potosí, sino también en la Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá. En Cerro de San Pedro, el festival cultural anual que el Frente había empezado a organizar durante dos o tres días en marzo o abril desde 2001 empezó a atraer a miles de personas a diario, incluyendo la

participación de conocidos intelectuales mexicanos como Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor y Javier Sicilia. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo numerosos actos y actividades en la ciudad de San Luis Potosí, incluyendo rondas informativas, marchas, plantones y protestas frente a las oficinas de Metallica Resources. Una de las acciones más importantes fue el proceso de consulta que el fao llevó a cabo en octubre de 2006, mediante la instalación de 64 casetas en la ciudad de San Luis y municipios colindantes, en las que 96.5% de las cerca de 20 000 personas que participaron expresaron su oposición a la MSX.

Ese mismo año, el fao organizó dos marchas en la ciudad de San Luis Potosí a lo largo de la calzada de Guadalupe (un importante bulevar de la ciudad) hasta la plaza de Armas, incorporando teatro y música; una en junio con unos trescientos participantes, y otra en noviembre, con aproximadamente la mitad. Además, en marzo de 2006, activistas de Greenpeace disfrazados de esqueletos protagonizaron una protesta frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México para exigir que la dependencia revocara su permiso para el proyecto de la msx. Dos meses después, la misma organización realizó una protesta frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, acusando a la embajada y a otras agencias gubernamentales canadienses de presionar a funcionarios federales y estatales mexicanos para garantizar que la msx siguiera adelante.

Al año siguiente, la lucha se internacionalizó, con la implicación de Amnistía Internacional, la Comisión Medioambiental del tlcan y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Reygadas y Reyna, 2008). Se formaron alianzas con Mining Watch Canada, un grupo de investigadores y estudiantes de la Universidad McGill de Montreal, y con la organización cristiana Kairos, con sede en Canadá, para ayudar a organizar acciones de protesta y llamar la atención sobre el caso en Canadá. Y en 2008, un mayor trabajo en red dentro de México contribuyó a la creación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

Mientras tanto, en Canadá, el Gobierno conservador progresista dirigido por el primer ministro Stephen Harper ignoró incluso las modestas recomendaciones contenidas en un informe publicado en marzo de 2007 por el grupo asesor de un comité permanente creado dos años antes para escuchar los testimonios de los representantes de las comunidades afectadas por las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero. El informe recomendaba obligar a estas empresas a elaborar informes públicos para ser elegibles para la ayuda financiera del Gobierno y crear un defensor del pueblo para investigar las quejas sobre violaciones a los derechos humanos. En 2009, el Gobierno de Harper presentó una propuesta alternativa basada en la responsabilidad social de las empresas, negándose en efecto a regular las actividades en el extranjero de las empresas mineras canadienses. En paralelo, el proyecto de Ley C-300, que pretendía crear vías para investigar las quejas de las comunidades afectadas negativamente y denegar las subvenciones gubernamentales a las empresas mineras declaradas culpables de violar los derechos humanos o infligir daños ambientales atroces, fue derrotado por un estrecho margen en la Cámara de los Comunes canadiense el 27 de octubre de 2010. De este modo, New Gold pudo seguir adelante con el desarrollo de la MSX sin tener que responder ante las autoridades canadienses; de hecho, con su apoyo activo.

Las acciones de protesta y las reivindicaciones comenzaron a disminuir una vez que las actividades de excavación y lixiviación en pilas se convirtieron en una rutina diaria en Cerro de San Pedro, a partir de 2007. Aunque el fao siguió ganando importantes sentencias judiciales, lo que arrojaba la sombra de la ilegalidad sobre el proyecto, esto no disuadiría a las operaciones mineras de seguir adelante, con el apoyo de organismos estatales clave y funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Una medida del continuo repudio al proyecto en el plano local ha sido el festival cultural anual, que sigue atrayendo entre cuatro y cinco mil visitantes diarios para participar en mesas redondas, presentaciones, cine y sobre todo música en la localidad de San Pedro.

En 2016, New Gold anunció el fin de las actividades de excavación y el inicio del proceso de cierre y restauración, mientras que el material acumulado sigue procesándose en las plataformas de lixiviación de la mina. Un año

después, aún no hay señales de actividades de restauración. Los opositores locales a la mina observan que la empresa sigue comprando propiedades en Cerro de San Pedro, lo que alimenta las especulaciones de que se está preparando para otra fase de explotación que implica una mina subterránea para extraer los minerales que quedan bajo la ciudad de San Pedro.

En cualquier caso, el proceso de cierre parece haber provocado nuevas formas de resistencia entre algunos trabajadores y miembros de la comunidad preocupados por las perspectivas de un futuro posterior a la mina. New Gold ha proporcionado empleo y algunos servicios a los residentes del municipio de Cerro de San Pedro, y la inminente retirada de estos ha llevado a algunas familias actualmente empleadas por la mina a buscar el apoyo del fao para negociar un mejor acuerdo para los trabajadores y las comunidades en la fase de cierre. La perspectiva de que Cerro de San Pedro vuelva a una situación de emigración y descenso de la población ha suscitado la preocupación de extraer el mejor trato posible de la empresa a medida que la mina se acerca al cierre. Durante el apogeo de la explotación de la mina, el empleo y los pagos a los hogares individuales sirvieron para dividir a la comunidad, ya que los beneficiados estaban enfrentados a los opositores, lo que impidió en muchos sentidos la formación de demandas colectivas eficaces. La fase de cierre, sin embargo, ha cambiado la dinámica de estas divisiones intracomunitarias y ha llevado a la toma de conciencia, quizá aún latente, de que puede ser posible una posición colectiva común en la lucha por las reclamaciones de indemnización tras el cierre de la mina (Mario Martínez, entrevista, 20/02/2018). Este tipo de política de clase, enmarcada en las reivindicaciones de los trabajadores, ha estado ausente de la mina en la última década, pero ha empezado a aflorar en la fase de cierre, lo que indica una vez más cómo la resistencia ha adoptado diferentes formas en distintos momentos del ciclo de vida de la mina.

Conclusiones

La Minera San Xavier (MSX) surgió en una coyuntura histórica y un contexto geográfico caracterizados por la libre movilidad del capital minero, el aumento de los precios internacionales de los minerales y metales y la disminución de

las leyes minerales. Los avances tecnológicos que permitían la explotación rentable de reservas de baja concentración se tradujeron en la promoción de gigantescas minas a cielo abierto que emplean sustancias tóxicas y consumen grandes cantidades de agua. Como potencia imperial de mineras "júnior", el Gobierno canadiense ayudó a las empresas mineras canadienses a explotar las reservas minerales extranjeras en condiciones seguras y rentables. En México, se llevaron a cabo reformas estructurales para atraer la inversión privada y extranjera en actividades extractivas y el tlcan contribuyó a fijarlas. Esto quedó patente cuando los activistas sociales del estado de San Luis Potosí bloquearon la creación de un vertedero de residuos tóxicos a mediados de la década de los noventa, lo que dio lugar a la imposición de una cuantiosa multa al Gobierno mexicano y sentó un importante precedente durante el periodo previo al conflicto en torno a la MSX.

En Cerro de San Pedro, como en otros lugares de México y América Latina, los residentes locales organizaron la resistencia a la minería a cielo abierto y a la lixiviación en pilas con cianuro. La multiplicación de estos tipos de conflicto ha dado lugar a un gran debate académico sobre la naturaleza de esta resistencia. Este artículo ha pretendido contribuir a los debates demostrando la aplicabilidad y complementariedad de tres enfoques que se han desarrollado en los campos de la ecología política y los estudios críticos del desarrollo para explicar la aparición y la naturaleza de los movimientos de resistencia a los proyectos mineros a gran escala. Se trata de la lucha de clases, la distribución injusta de los costos y beneficios ecológicos y las valoraciones inconmensurables de los entornos naturales y los construidos por el ser humano. El argumento principal es que estos enfoques pueden combinarse para arrojar luz sobre distintos momentos y aspectos de luchas específicas contra proyectos mineros, como ilustra el estudio de caso de la MSX.

Las estrategias y los discursos de la lucha en Cerro de San Pedro han evolucionado con el tiempo en relación dialéctica con el ciclo de vida de la mina, posponiendo el inicio de las actividades extractivas y de procesamiento y adaptándose a su evolución. Esto sugiere que resulta beneficioso adoptar un marco pluralista y tener en cuenta los factores temporales. Además, el caso de la msx ilustra cómo se ha construido y sostenido una agencia colectiva de resistencia, con flujos y reflujos, por medio de una praxis que gira en torno a la defensa de

los bienes comunales y las valoraciones en el plano local, enfrentadas a las del capital y las agencias del Estado neoliberal. Así, el movimiento de resistencia a la MSX puede caracterizarse en un nivel superior de abstracción como una lucha por defender y recrear "los bienes comunales", con dimensiones tanto materiales como simbólicas. La articulación de una tríada de ópticas analíticas ha tratado de poner de relieve estas dimensiones.

Además, al contextualizar el estudio de caso en un análisis más amplio de los conflictos socioambientales en torno a la minería en México y en otros lugares de América Latina, esta investigación pretende ilustrar las formas en que la lucha contra la msx es representativa de tendencias más amplias, así como de sus peculiaridades. Como una de las primeras luchas en México contra los proyectos mineros canadienses en el contexto del tlcan, los líderes del movimiento de resistencia fueron pioneros en las estrategias de resistencia en el frente legal y desempeñaron un papel decisivo en la construcción de alianzas y redes antimineras en los ámbitos nacional e internacional. De este modo, la lucha contra la MSX se ha convertido en emblemática en México de la resistencia a la megaminería tóxica. Sin embargo, este caso no es representativo de las prototípicas luchas ecoterritoriales contra la minería en México libradas por campesinos que buscan proteger los medios de vida tradicionales en la agricultura y la ganadería. Como hemos visto, la base de clase del movimiento de resistencia a la MSX es heterogénea en cuanto a sus relaciones con los medios de producción, tanto en Cerro de San Pedro como en la ciudad de San Luis Potosí. Además, debido a la proximidad de la mina a la ciudad de San Luis, la población afectada incluye no solo a los habitantes del municipio de Cerro de San Pedro, sino también a toda la población de la zona urbana, cuya fuente de agua se ha visto aún más mermada y sometida a un mayor riesgo de contaminación. En estas condiciones, las conclusiones de esta investigación sugieren que la lucha en el plano local tiene más que ver con la defensa de las condiciones de reproducción social y cultural que con la protección de los medios de producción que sustentan los medios de vida tradicionales. Estas incluyen no sólo un entorno vital no contaminado y la disponibilidad de agua limpia para el consumo humano, sino también la conservación del patrimonio natural y arquitectónico con significado histórico y cultural.

En cuanto a las lecciones políticas, son mixtas y contradictorias. Por un lado, el gigantesco cráter, los montones de escombros tóxicos y las balsas de residuos de Cerro de San Pedro son un testimonio visual del poder del gran capital minero y de sus aliados en los Gobiernos. Por otro, como uno de los primeros movimientos de resistencia en México a un proyecto minero canadiense en el contexto del tlcan, contribuyó en gran medida a llamar la atención sobre los costos ambientales y sociales de los proyectos mineros a gran escala. Trazó vías de acción legal para oponerse a las minas en otras partes del país y a la construcción de una red nacional antiminera de activistas y grupos afectados con vínculos con organizaciones internacionales. En respuesta a estos acontecimientos, el Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto ha dado un giro a la política minera del país en la dirección del "nuevo extractivismo", imponiendo mecanismos para captar una mayor parte de la renta derivada de las actividades mineras y canalizarla a los municipios y estados donde se concentran estas actividades para financiar proyectos de desarrollo social. Políticamente, esto constituye un intento de cooptar a la oposición y de obtener un apoyo más amplio para la continuación y mayor expansión de la minería a gran escala por parte del sector privado. Se trata de una estrategia que quizá será reforzada y consolidada por el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador, planteando nuevos retos a los grupos afectados y a las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la megaminería tóxica incluso bajo esquemas progresivos de redistribución de la renta.

Referencias

Acosta, A. (2013). Extractivism and neoextractism: two sides of the same curse. En M. Lang y D. Mokrani (eds.), *Beyond development: alternative visions from Latin America* (pp. 61-86). Fundación Rosa Luxemburg.

Alimonda, H. (2011). La colonialidad de la naturaleza: una aproximación a la ecología política latinoamericana. En H. Alimonda (ed.), *La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina* (21-60). Clacso.

Arsel, M., B. Hogenboom y L. Pellegrini. (2016). The extractive imperative in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, *3*, 880-887.

Azamar, A. (2015). La Mina de San Xavier: actividad extractiva y daño al tejido social en México. *Paradigma Económico*, *7*, 57-67.

Azamar, A. y J. I. Ponce. (2014). Extractivismo y desarrollo: los recursos minerales en México. *Revista Problemas del Desarrollo*, *179*(45), 137-158.

Barkin, D., M. Fuente Carrasco y D. Tagle Zamora. (2012). La significación de una economía ecológica radical. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, *19*, 1-14.

Bebbington, A. J. (2011). Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. En A. J. Bebbington (coord.), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales* (23-46). Instituto de Estudios Peruanos, Centro Peruano de Estudios Sociales.

Chiasson-LeBel, T. (2016). Neo-extractivism in Venezuela and Ecuador: a weapon of class conflict. *The Extractive Industries and Society*, *3*(4), 888-901.

Clark, B. y J. B. Foster. (2009). Ecological imperialism and the global metabolic rift: unequal exchange and the guano/nitrates trade. *International Journal of Comparative Sociology*, *50*(3-4), 311-334.

Composto, C. y M. L. Navarro. (2011). *Balances de la lucha contra la megaminería en San Luís Potosí, México. A propósito del x Festival del Cerro de San Pedro.* http://jra.espora.org/index.php/noticias/265-balances-de-la-lucha-contra-la-megamineria-en-san-luis-potosi-mexico-a-proposito-del-x-festival-del-cerro-de-san-pedro.html

Conde, M. (2017). Resistance to mining: a review. *Ecological Economics*, *132*, 80-90.

Cortés Cortés, R., E. Zapata Martelo, M. R. Ayala Carrillo, R. Rosas Vargas y H. Navarro Garza. (2016). Megaminería y género. Acumulación

por desposesión en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. *Sociedad y Ambiente*, *5*(12), 61-97.

Cypher, J. (2010). South America's commodities boom: developmental opportunity or path-dependent reversion? *Canadian Journal of Development Studies*, *30*(3-4), 635-662.

Delgado Ramos, G. C. (2012). Cambio global y geopolitización hemisférica de los recursos naturales. *Nostromo. Revista Crítica Latinoamericana*, *4*(5), 12-24.

Delgado Wise, R. y R. del Pozo Mendoza. (2005). Mexicanization, privatization, and large mining capital in Mexico. *Latin American Perspectives*, *32*(4), 65-86.

Denault, A. y W. Sacher. (2012). *Imperial Canada Inc.: legal haven of choice for the world's mining industries*. Talonbooks.

Dougherty, M. (2013). The global gold mining industry: materiality, rent-seeking, junior firms and Canadian corporate citizenship. *Competition and Change*, *17*(4), 339-354.

Escobar, A. (2006). Difference and conflict in the struggle over natural resources: a political ecology framework. *Development*, *49*(3), 6-13.

Fuente, M. E. y D. Barkin. (2013). Mining as a development factor in the Sierra Juárez in Oaxaca: an ethical evaluation. *Problemas del Desarrollo*, *44*(172), 123-144.

Gámez, M. (2008). El espacio de la discordia. Riqueza mineral y expectativas empresariales en Cerro de San Pedro, siglos xix y xx. En C. Costero Garbarino (ed.), *Internacionalización económica, historia y conflicto en la minería. El caso de Minera San Xavier* (pp. 41-80). El Colegio de San Luis.

Garibay, C. (2010). Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual. En G. C. Ramos (ed.), *Ecología política de la minería en América Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la megaminería* (133-182). Universidad Nacional

Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Garibay, C., A. Boni, F. Pánico y P. Urquijo. (2011). Unequal partners, unequal exchange: Goldcorp, the Mexican state, and campesino dispossession at the Peñasquito Goldmine. *Journal of Latin American Geography*, *10*(2), 153-176.

Gordon, T. (2010). *Imperialist Canada*. Arbeiter Ring Publishing.

Gordon, T. y J. Webber. (2008). Imperialism and resistance: Canadian mining companies in Latin America. *Third World Quarterly*, *29*(1), 63-87.

Gordon, T. y J. Webber. (2016). *Blood of extraction. Canadian imperialism in Latin America*. Fernwood Publishing.

Gudynas, E. (2010). El nuevo extractivismo del siglo xxi. Diez tesis sobre el extractivismo bajo el progresismo sudamericano actual. *Revista Memoria*, *242/243*, 12-17, 24-30.

Gudynas, E. (2014). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. *Decursos. Revista en Ciencias Sociales*, *27-28*, 79-115.

Guha, R. y J. Martínez Alier. (1997). *Varieties of environmentalism*. Earthscan.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.

Heidrich, P. (2016). Determinants, boundaries, and patterns of Canadian mining investments in Latin America (1995-2015). *Latin American Policy*, *7*(2), 195-214.

Hogenboom, B. (2012). Depoliticized and repoliticized minerals in Latin America. *Journal of Developing Societies*, *28*(2), 133-158.

Lamberti, M. J. (2009). Una lucha a "cielo abierto". El caso del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier. En H. Alimonda (ed.), *La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina* (259-292). Clacso.

López Bárcenas, F. y M. E. Galicia. (2011). *El mineral o la vida. La legislación minera en México*. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos indígenas / Pez en el Árbol / Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, A.C.

Madrigal, D. (2009). *"La naturaleza vale oro": riesgos ambientales y movilización social en el caso de la empresa minera canadiense New Gold/Minera San Xavier en México* [tesis de doctorado, Urban and Environmental Studies, El Colegio de México].

Madrigal, D. (2014). Conflictos y no conflictos en el valle de San Luis Potosí. Análisis de la dimensión conflictiva de lo socioambiental a partir de dos casos. En F. Paz y N. Risdell (eds.), *Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México* (59-89). Miguel Ángel Porrúa / Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México.

Madrigal, D. (2019). Con piscina en casa, pero de lixiviación: clientelismo social y horizonte de coerción en una población relocalizada por la minería canadiense en el centro de México. En M. Guzmán. L. Tyrania y C. Garibay (eds.), *Conocimiento, ambiente y poder. Perspectivas desde la ecología política* (41-64). UNAM / CIESAS / COLSAN.

Martínez Alier, J., G. Kallis, S. Veuthey, M. Walter y L. Temper. (2010). Social metabolism, ecological distribution conflicts, and valuation languages. *Ecological Economics*, *70*(2), 153-158.

Martínez Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar.

Martínez Alier, J. y M. Walter. (2016). Social metabolism and conflicts over extractivism. En F. Castro, B.Hogenboom y M. Baud (eds.), *Environmental governance in Latin America* (pp. 58-85). Palgrave Macmillan.

Martínez Chaves, P. A., A. Betancourt Mendieta, M. N. Caretta y M. Aguilar Robledo. (2010). Procesos históricos y ambientales en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México, 1948-1997. *Región y Sociedad*, *22*(48), 211-241.

Moore, J. y G. Colgrove. (2013). *Corruption, murder and Canadian mining in Mexico: the case of blackfire exploration and the Canadian embassy*. Mining Watch. https://miningwatch.ca/sites/default/files/blackfireembassyreport-web.pdf

Natural Resources Canada. (2017). *Canadian mining assets*. http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/19323

Navarro, M. L. (2015). *Luchas por lo común. Antagonismo social contra el renovado cercamiento y despojo capitalista de los bienes naturales en México*. Bajo Tierra / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Ortiz, J. J. (2009). *La batalla por el Cerro de San Pedro*. San Luis Potosí. Servicios Editoriales Debajo del Agua.

Otero, G. (2004). *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural*. Miguel Ángel Porrúa / UAZ / Simon Fraser University.

Pánico, F. y C. Garibay. (2011). Minería y territorio: una mirada al conflicto desde Mazapil, Zacatecas. *Dimensión Antropológica*, *18*(52), 123-153.

Peña Ramírez, J. (2012). *Crisis del agua en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, León y Ciudad de México (1950-2010)*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Peña, F. y E. Herrera. (2008). Vocaciones y riesgos de un territorio en litigio. Actores, representaciones sociales y argumentos frente a Minera San Xavier. En C. Costero Garbarino (ed.), *Internacionalización económica, historia y conflicto en la minería. El caso de Minera San Xavier* (181-222). El Colegio de San Luis.

Pérez Jiménez, S. (2014). *Territorialidades contenciosas en México: el caso de la minería* [tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación en Geografía Ambiental].

Petras, J. y H. Veltmeyer. (2018). *The class struggle in Latin America: making history today*. Routledge.

Porto Gonçalves, C. (2001). *Geografías: movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. Siglo XXI Editores.

Quintana, R. D. (2014). Rural social actors and mining mega-projects in Mexico. *Problemas del Desarrollo*, *45*(179), 159-180.

Reygadas, P. y O. F. Reyna Jiménez. (2008). La batalla por San Luis: ¿el agua o el oro? La disputa argumentativa contra la Minera San Xavier. *Estudios Demográficos y Urbanos*, *23*(2), 299-331.

Roberts, A. (2008). Privatizing social reproduction: the primitive accumulation of water in an era of neoliberalism. *Antipode*, *40*(4), 535-560.

Sacher, W. (2015). Megaminería y desposesión en el Sur: un análisis comparativo. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, *51*, 99-116.

Sankey, K. (2014). Colombia: the mining boom: a catalyst of development or resistance? En H. Veltmeyer y J. Petras (eds.), *The new extractivism: a post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first century?* (114-143). Zed Books.

Santacruz de León, G. (2008). La minería del oro como problema ambiental: el caso de Minera San Xavier. En C. Costero Garbarino (ed.), *Internacionalización económica, historia y conflicto en la minería. El caso de Minera San Xavier* (147-180). El Colegio de San Luis.

Schiaffini, H. H. (2011). Minería, conflicto y mediadores locales. Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, México. *Cuadernos de Antropología Social*, *34*, 115-139.

Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: theories, movements and nature*. Oxford University Press.

Silva, L. (2010). Implicaciones sociales en la legislación ambiental. El proceso de evaluación de impacto ambiental de Minera San Xavier. En G. C. Ramos Delgado (ed.), *Ecología política de la minería en América Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la megaminería* (213-250). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Svampa, M. (2015). The "commodities consensus" and valuation languages in Latin America", *Alternautas*, *2*(1), 34-59.

Tetreault, D. (2014). Resistance and reform in Mexico's mining sector. En J. Petras y H. Veltmeyer (eds.), *Extractive imperialism in the Americas: capitalism new frontier* (194-233). Brill.

Toledo, V. M. (2015). *Ecocidio en México. La batalla final es por la vida*. Grijalbo.

Veltmeyer, H. y J. Petras (eds.). (2014). *The new extractivism: a post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first century?* Zed Books.

40. El retorno de la minería a la Europa rural: de transiciones energéticas, zonas de sacrificio y conservación[1]

Camila del Mármol e Ismael Vaccaro

Resumen: En la última década se observa en Europa un crecimiento de la minería metálica y de los llamados a su recuperación. En estas páginas analizamos el contexto geopolítico y las narrativas que están facilitando este resurgimiento en las zonas rurales de Europa. Se trata de una tendencia que representa un cambio fundamental en relación con las prioridades históricas de la Unión Europea (UE) para el desarrollo local de las zonas periféricas del continente, hasta hace poco centradas en la conservación de la naturaleza y la promoción del turismo. Nos referimos a un marco de gestión, en vigor desde los años setenta del siglo pasado, que se enfrenta hoy en día a este renovado interés por el fortalecimiento del autoabastecimiento de determinadas materias primas. Dos factores son fundamentales para entender estos cambios. Por un lado, la dependencia de los países de la ue en materia de minerales metálicos que se ha puesto en evidencia en los últimos años debido a una serie de reorganizaciones geopolíticas entre países productores y países importadores. Por otro, el auge de los discursos reclamando una transición verde hacia energías y tecnologías sostenibles. En estas páginas nos interesa profundizar tanto en las dimensiones económicas y políticas como en las ideologías que subyacen en estos procesos. Nos centraremos en analizar las principales normativas de la ue en los últimos años y el marco legal contradictorio que se establece y da lugar a una convivencia paradójica entre conservación ambiental y extractivismo.

1 Publicado originalmente en: Camila del Mármol e Ismael Vaccaro, 2020, "New extractivism in European rural areas: how twentieth first century mining returned to disturb the rural transition", *Geoforum*, 116, 42-49.

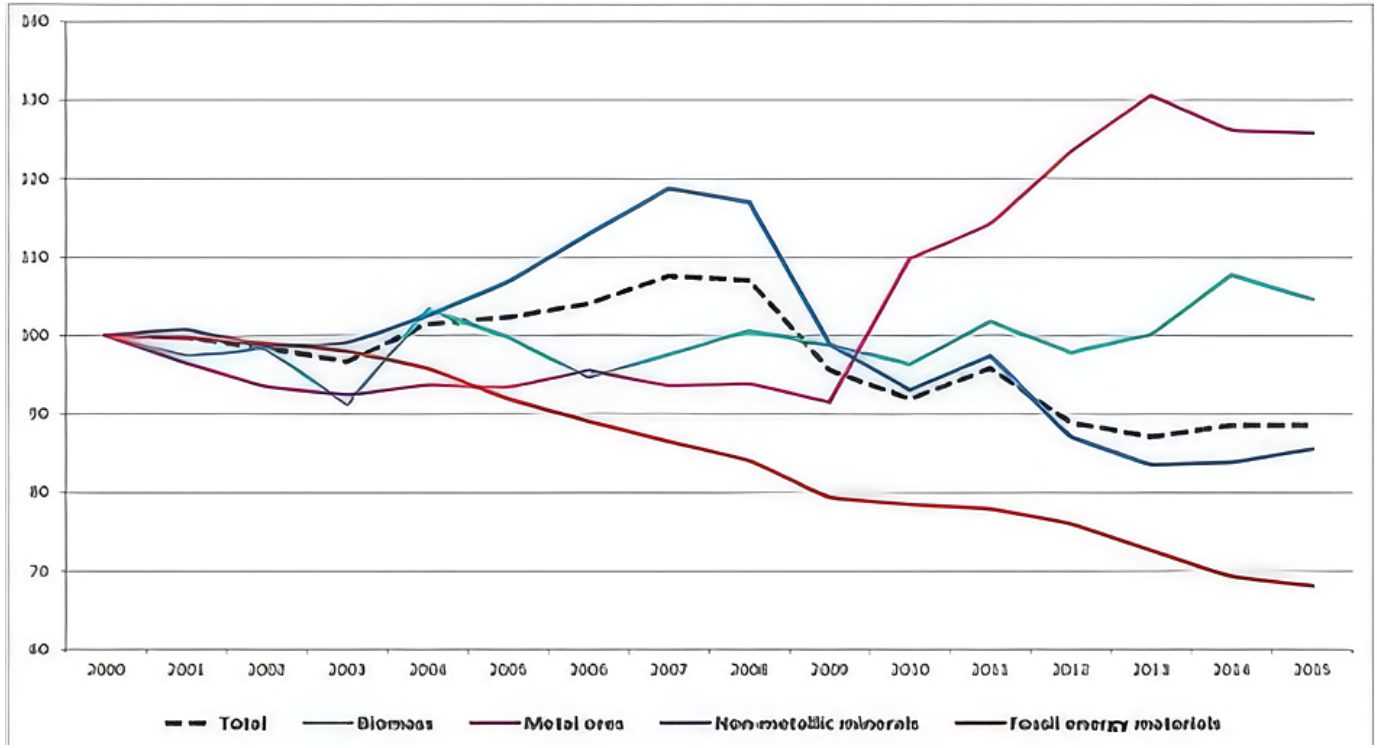
La Europa rural y las consecuencias de la transición energética

Los paisajes rurales de la periferia europea se enfrentan, hoy en día, a una posible diversificación de sus posibilidades productivas. La Unión Europea, durante décadas, ha promovido la conservación y el turismo como elementos clave para el desarrollo local de estas zonas. Junto con los procesos ampliamente analizados de conservación neoliberal y mercantilización de la naturaleza que han alterado de forma profunda la dirección del desarrollo rural en Europa durante los últimos cincuenta años (Marsden *et al*., 1993; Halfacree, 1999; Wilson, 2001; 2007), en tiempos recientes han resurgido viejas alternativas a los usos actuales de la tierra. En los últimos años una diversidad de autores ha venido advirtiendo de la propagación por toda Europa de procesos críticos en los que se están redefiniendo la gestión de fuentes naturales de recursos como el agua, la energía o la tierra (en forma de acaparamientos) y el desarrollo de nuevos marcos legales destinados a facilitar esta nueva oleada de reterritorialización de dichos recursos naturales (Van der Ploeg *et al*., 2015; Franquesa, 2018; Ye *et al*., 2020). Un examen minucioso de estas nuevas tendencias de acumulación de capital dentro de las zonas rurales es clave para acercarse a una comprensión más matizada de la naturaleza cambiante del capitalismo global y de la rápida forma en que las dinámicas locales se están viendo afectadas por sus lógicas omnipresentes. Recientemente, la minería metálica, con el apoyo sin matices de las instituciones europeas, se ha añadido a esta expansión del extractivismo.

Acostumbrados a trabajar en las complicadas relaciones entre comunidades locales y áreas protegidas, en los últimos años numerosos investigadores del mundo rural europeo han empezado a observar cómo las montañas de Europa están siendo reexploradas por la industria minera. En todo el continente se ha acelerado la identificación y extracción de minerales considerados "críticos" para la reproducción del sistema económico actual. Esta carrera se manifiesta en forma de una proliferación de solicitudes de permisos de prospección o de pruebas reales sobre el terreno, junto con la expansión de minas de todo tipo, a cielo abierto y subterráneas (Eurostat, 2018). Esta tendencia se suma a la estructura ya desarrollada

por las industrias extractivas que afectan a las zonas rurales de Europa, centradas hasta ahora, sobre todo, en los minerales de construcción e industriales (EIP, 2018). En un momento en el que el cambio climático se hace evidente y causa estragos, Europa se aboca a la extracción de minerales metálicos en su afán por aumentar su autosuficiencia económica (y geopolítica). En este contexto, la actual expansión de la minería de minerales metálicos en toda Europa, junto con la ya consolidada extracción de minerales industriales y para la construcción, están provocando cambios profundos en las trayectorias de las zonas rurales. Contrario a las antiguas tendencias de desarrollo rural basadas en la protección natural (Prados, 2008; Peluso, 1993; Jordan, 2005), esta nueva ola de extractivismo está escaneando las zonas rurales europeas, escudriñando la tierra en busca de minerales críticos (EC, 2008). Muchos proyectos de prospección y minas están explorando unos paisajes rurales que, hasta ahora, se habían desarrollado en un marco dominado por las políticas de conservación, las zonas protegidas y la promoción del turismo. Encontramos que esto sucede incluso dentro de la jurisdicción de áreas protegidas ya establecidas, como es el caso de los Pirineos catalanes, donde, en un espectacular puerto de montaña entre Francia y España, una corporación internacional ha realizado prospecciones en busca de wolframio a ambos lados de la frontera. En este lugar concreto, donde hemos desarrollado investigaciones a largo plazo desde 2005 (Vaccaro y Beltrán, 2014; Del Mármol, 2016), una larga historia de cría de ganado en tierras comunales dio paso a la extracción de madera a gran escala y a la posterior transformación del paisaje, para convertirse al final en una zona protegida. La irrupción de las prospecciones de wolframio desató una escalada de acciones por parte de movimientos sociales y plataformas de oposición (o apoyo) a la iniciativa a ambos lados de la cordillera. Numerosos habitantes de la zona están profundamente preocupados por la forma en que la minería puede acabar transformando sus vidas.

Figura 1. Extracción interna por categoría de material en 2000-2015, UE 28 (2000 = 100).



Fuente: Eurostat (2018: 103).

Durante la "era mineral", como la ha llamado Jacka (2018), la extracción de minerales se ha expandido por todo el mundo de manera exponencial, invadiendo tierras y prevaleciendo sobre usos anteriores (Arsel *et al*., 2016). A lo largo de la historia, la minería metálica tuvo una presencia importante en las zonas rurales de Europa y fue un factor clave en la reconfiguración de no pocos de sus paisajes. Este mismo sector es crucial en los procesos contemporáneos que definen los medios de vida económicos y ecológicos en numerosas regiones del Sur global (Gudynas, 2013; Kirsh, 2014; Bebbington y Humphreys, 2018). No obstante, en los paisajes europeos, su influencia había disminuido de forma considerable. Las últimas décadas del siglo xx fueron testigos de una retirada gradual de la extracción de minerales metálicos en Europa, debido a las crecientes limitaciones impuestas por el desarrollo de la legislación ambiental y el aumento de los costos laborales, así como por la reducción de los costos de transporte desde el extranjero (Wagner y Fettweiss, 2001). Pero esta situación parece empezar a revertirse. En unos pocos años, lo que describía la literatura generada por la antropología de la minería, mayormente centrada en estudios de caso de Sudamérica, Oceanía o África, comienza a observarse en Europa. Lo que parecía inimaginable en nuestros campos de estudio, está deviniendo relevante para la comprensión de las transformaciones del paisaje: la minería vuelve a probar suerte bajo los bosques rebrotados de Europa. Este fenómeno reciente es, en parte, consecuencia de que la Unión Europea, espoleada por una situación de debilidad en el mercado internacional de materias primas, ha modificado el marco regulador de la extracción de minerales. Esta vulnerabilidad está conectada a la proliferación de medidas gubernamentales de las economías emergentes para alterar el comercio internacional de materias primas: impuestos y cuotas a la exportación, subvenciones, fijación de precios, doble precio y normas restrictivas a la inversión, entre otras (EC, 2008). Estas normativas, que se centran en la promoción del autoabastecimiento de lo que ahora se consideran minerales prioritarios, están transformando el marco legislativo y político que había imperado durante décadas en las zonas rurales europeas (EC, 2008; 2010; 2011; 2016). La minería de minerales metálicos es un sector extremadamente potente que se ha se ha consolidado en muchas zonas del Sur global y que avanza con paso firme por todo el mundo (Ferry, 2002; Kirsh, 2014;

Gudynas, 2015; Jacka, 2018; Pijpers y Eriksen, 2019), pero que, durante mucho tiempo, debido a sus costos ambientales y sanitarios, había sido rechazada por Europa. Hoy en día se está expandiendo por el continente y marcando un hito importante en la historia reciente del desarrollo rural.

Este proceso relativamente nuevo requiere un esfuerzo sistemático de investigación a escala europea. ¿Cómo influyen las prioridades geopolíticas y las condiciones del mercado mundial en la transformación de las zonas rurales europeas? Es necesario recuperar un prisma de análisis multiescalar ¿Cuál es el impacto concreto del empuje minero en las distintas regiones que accionan proyectos extractivos? Y en el plano local: ¿Hasta qué punto este resurgimiento minero entra en conflicto con las políticas de conservación, las áreas protegidas y la promoción del turismo rural? Es fundamental, asimismo, una correcta identificación de los actores involucrados y sus preferencias. Estas preguntas críticas se relacionan con los debates establecidos y reconocidos que giran en torno al cambio rural (Cloke, 1990; Wilson, 2001; Woods, 2011; Li *et al*., 2019), la cuestión agraria (Bernstein y Byres, 2001; Akram-Lhodi y Kay, 2010; Narotzky, 2016; Bernstein, 2017) y la crítica de la conservación y la ecología política (Büscher *et al*., 2012; Cronon, 1996; Hornborg y Martínez-Alier, 2016; Igoe, 2010; Tsing, 2005; Vandergeest y Peluso, 2009); y abren una vía de replanteamiento crítico de la transición rural en el contexto europeo.

En este artículo pretendemos explorar los todavía incipientes pasos del retorno del extractivismo a la Europa rural mediante una revisión de las fuentes bibliográficas y estadísticas pertinentes y un análisis de los marcos jurídicos que están enmarcando políticamente este proceso socioeconómico. Examinaremos el contexto geopolítico que condujo al resurgimiento de la minería metálica en las zonas rurales de Europa y el alcance de este proceso que afecta a los antiguos usos del paisaje. El énfasis previo en la conservación de la naturaleza y la promoción del turismo, fomentados igualmente desde los años setenta (Jordan, 2005; MacCormick, 2001; Langlet y Mahmoudi, 2016), se enfrenta hoy en día a un renovado interés por el fortalecimiento del autoabastecimiento de determinadas materias primas. Repasaremos las normativas más relevantes como herramientas clave para captar la contradicción dentro de los nuevos marcos legales.

Además, defenderemos la necesidad de estudiar el alcance de estos cambios basándonos en la vasta experiencia de investigación sobre el extractivismo en el extranjero, con el fin de abrir un diálogo fructífero y prevenir las terribles condiciones provocadas por las explotaciones mineras de metales en varias partes del mundo (Hornborg y Martínez-Alier, 2016; Pijpers y Eriksen, 2019; Moreno *et al*., 2016).

Uno de los elementos destacados del retorno de la minería es que se sustenta en una narrativa ecologista. Estos minerales, nos dicen, son necesarios para la consolidación de la transición energética que salvará al continente y al mundo. Hay que extraer para proteger. Se trata de una narrativa legitimadora extremadamente potente (Buu-Sao *et al*., 2023). Por otro lado, deja entrever sus propias contradicciones. El cambio de fuentes de energía que propone la transición energética, en efecto, promueve la sustitución de unas fuentes de energía más contaminantes (basadas en el petróleo) por unas renovables y menos peligrosas para la salud colectiva (solar o eólica). El problema que se intuye rápido es que la producción de las tecnologías necesarias para esta transición de lo no sostenible a lo sostenible se basa en la extracción masiva de materiales contaminantes y procesamiento en cadena que, desde sus inicios, ha caracterizado el sistema productivo capitalista y que ha creado el problema ecológico global que pretende aliviar la transición energética.

La antropología de la minería lleva años estudiando el extractivismo minero. La transición energética corre el riesgo de convertirse en otra "transición injusta" (Bainton *et al*., 2021; Jasanof, 2018). Un proceso que, justificado en el bien colectivo, "el bien de muchos justifica el daño a unos pocos", va a requerir el establecimiento de "zonas de sacrificio" (Fox, 1999; Holifield y Day, 2017; Klein, 2014; Lerner, 2010), zonas marginales, a menudo con población de bajos ingresos y poco peso político nacional, que tendrán que soportar porcentajes relativos exageradamente desproporcionados de problemas ambientales asociados a la contaminación, distribución de residuos tóxicos o a la industria pesada (Castán y Sanzana, 2020; Scott y Smith, 2017). El costo ambiental será pagado, *in situ*, por las comunidades locales donde se abrirán las minas y los centros de procesamiento que, en teoría, salvarán el futuro colectivo. Comunidades

que, además, estarán sujetas a la impredecibilidad del ciclo capitalista, caracterizado por momentos de "expansión y colapso", el *boom and burst cycle*, en inglés (Fraser y Larmer, 2010; Willow y Wylie, 2014). Es decir, que la actividad económica va a tener un ciclo vital que, después de una fase de expansión, de creación de riqueza, va a desvanecerse, dejando solo los problemas ambientales. Serían entonces comunidades expuestas a lo que se ha denominado "la violencia lenta" (Davies, 2019; Sandlots y Keeling, 2016), que no se ve, es gradual, dispersa a lo largo del tiempo y el espacio, no es instantánea, ni espectacular, es incremental y, con el tiempo, reduce las posibilidades de la comunidad de sobrevivir y reproducirse socialmente (Nixon, 2011: 2).

Todo esto no se diferencia de lo ocurrido a comunidades parecidas que, en cada momento histórico de transición energética, se vieron obligadas a pagar el precio colectivo: pueblos que fueron inundados, sus calles y sus campos, por el agua embalsada en la construcción de presas hidroeléctricas; comunidades transformadas por la apertura de minas de carbón o vertederos tóxicos situados en sus territorios, o por centrales nucleares instaladas en su vecindad (Franquesa, 2018; 2020; Jasanof, 2018). Por el momento, esta nueva transición verde parece vestir los mismos ropajes que cada uno de los previos ciclos de expansión económica del capitalismo, con los mismos beneficiados y los mismos damnificados (Sovacool, 2021; Vázquez, 2020).

La minería metálica, la UE y la geopolítica

Entre 2000 y 2013, la extracción de minerales metálicos en la UE-28 creció alrededor de 30% (Eurostat, 2018, Fig. 1). Este es el resultado de una situación crítica del suministro mundial de materias primas (Banco Mundial, 2018) que impulsó a la Unión Europea a revisar sus políticas de aprovisionamiento y suministro. El auge de las materias primas en la década de 2000, la creciente demanda de los mercados emergentes y la preocupación por el suministro a largo plazo, junto con una necesidad cada vez mayor de esos materiales en los sectores de la alta tecnología, la electrónica, la defensa y la industria, afectaron a la evolución de los

precios de los minerales metálicos y triplicaron los precios entre 2002 y 2008 (ec, 2008). Esta situación crítica de suministro se vio agravada por el dominio global de China del mercado de minerales metálicos (Brautigam, 2009) que representa casi la mitad del consumo mundial de metales (Unctad, 2015). A modo de ejemplo, la crisis de los minerales metálicos de 2010-2012, desencadenada por las cuotas de exportación de tierras raras impuestas por China sobre elementos como el wolframio y el molibdeno, desencadenó una respuesta mundial en forma de disputa comercial en la que participó la Organización Mundial de Comercio y un aumento global de las inversiones y las exploraciones (Cox y Kynicky, 2017). Además, las recientes leyes, reglamentos y normas de certificación sobre minerales extraídos en zonas afectadas por conflictos militares (como el Reglamento 2017/821 de la ue, la sección 1502 de la Ley Dodd Frank de Estados Unidos, la Certificación Regional de la ICGRL, entre otros), han afectado a varios países al establecer la obligación para los importadores de probar el origen legítimo de la cadena de suministro y restringir aún más el suministro de ciertos minerales críticos (Barume *et al*., 2016).

En este contexto, garantizar un suministro seguro y estable de materias primas se ha convertido en una política estratégica de los Gobiernos de todo el mundo, y desempeña un papel crucial en el contexto de la transición en curso del sistema energético europeo hacia una economía reducida en carbono tras el Acuerdo de París de 2016 (Pavel y Tzimas, 2016). Los riesgos potenciales de escasez de materias primas podrían agravarse con la dependencia de las importaciones, la creciente demanda de China y las economías emergentes, la inestabilidad de los países proveedores, el descubrimiento de nuevas aplicaciones, los factores económicos y políticos, las restricciones comerciales y la disponibilidad, entre otros. Aunque el mercado mundial de materias primas, incluido el precio de los minerales, menas y metales, ha mostrado signos de declive desde 2011 y se espera que siga cayendo de acuerdo con el actual deterioro de la situación macroeconómica (Banco Mundial, 2019), esta tendencia disfraza el rendimiento de determinadas materias primas (UNCTAD 2015) y, lo que es más importante, no repercute de forma directa en las tendencias políticas que ya están operativas. Por otra parte, se espera que los minerales, menas y metales mantengan

sus precios o incluso continúen con una tendencia creciente moderada en algunos casos durante los próximos diez años (Banco Mundial, 2019). Estas previsiones financieras coinciden con el argumento de que las materias primas están experimentando un auge de superciclo, una subida de precios impulsada por la demanda que durará décadas y no solo breves lapsos (Cuddington y Jerrett, 2008; Erten y Ocampo, 2013). Algunas previsiones auguran un aumento de 95% en la extracción mundial de minerales metálicos hasta 2050 (EIP, 2018).

En este sentido, el acceso a las materias primas para evitar la dependencia exterior se ha convertido y sigue siendo una prioridad geopolítica para la UE. En 2008 anunció la Iniciativa sobre Materias Primas y la Asociación Europea para la Innovación en Materias Primas. Como afirma la EC (2008: 2): "Las materias primas son esenciales para el funcionamiento sostenible de las sociedades modernas. El acceso a las materias primas minerales y su asequibilidad son cruciales para el buen funcionamiento de la economía de la UE. Sectores como la construcción, los productos químicos, la automoción, la industria aeroespacial, la maquinaria y los equipamientos, que proporcionan un valor añadido total de 1.324 billones de euros y emplea a unas treinta millones de personas, dependen del acceso a las materias primas". Desarrollada por Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la UE, responsable de rediseñar el mercado interior de bienes y servicios, la Iniciativa de las Materias Primas se considera un paso fundamental hacia la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la comunidad (UNCTAD, 2015) y la transición a una economía circular y con bajas emisiones de carbono para 2050 (EIP, 2018). Al mismo tiempo, se considera un paso crucial para satisfacer las necesidades críticas europeas de crecimiento y conservación del empleo, ya que contribuye a tres pilares económicos fundamentales: asegurar el suministro de materias primas de los mercados mundiales, un suministro sostenible dentro de la ue y promover la eficiencia de los recursos mediante el reciclaje (EC, 2008). Como ya ha destacado Oulu (2016: 456), estos pilares se basan firmemente en una ideología de libre mercado e incluyen planes para crear y ampliar el mercado mundial de materias primas. La estrategia incluye también una lista de materias primas críticas (CRM, por sus siglas en inglés), definidas como "materias primas de gran importancia para la

economía de la UE y cuyo suministro está asociado a un alto riesgo" (EC, 2017b: 7). En la mayoría de los casos, las materias primas definidas como críticas por la ue coinciden con la criticidad de los minerales tal como se entiende en el plano global. Sin embargo, algunos pocos materiales son calificadas de forma exclusiva como críticos en el contexto europeo. La determinación de la criticidad de las materias primas se basa en dos parámetros: la llamada importancia económica (IE) y el riesgo de suministro (SR):[2] Veinte de las veintiséis identificadas como crm en la lista actualizada de 2017 son minerales metálicos o metaloides.[3] Este marco legal rompe con los anteriores enfoques basados en el comercio y se centra en impulsar la producción europea, ya sea promoviendo nuevas actividades mineras o mediante actividades de reciclaje (EC, 2017b).

Minería verde: los nuevos horizontes de los minerales metálicos

Entre la lista de materias primas críticas de 2017 se encuentran muchos metales como el cobalto, el vanadio, el platino, el tantalio, los elementos provenientes de tierras raras, el magnesio y el wolframio, entre otros, cuyo suministro en Europa depende en gran medida del mercado internacional (EIP, 2018). Los materiales con mayor puntuación de importancia económica en la UE son el wolframio (IE=7.3) y el magnesio metálico (IE=7.1) (EC, 2017: 41). En medio de lo que se ha dado en llamar la "cuarta revolución industrial" (Schwab, 2015), que aboga por la industrialización digital y las tecnologías limpias, la demanda de estos minerales raros y exóticos está creciendo debido a sus aplicaciones en los sectores de la alta tecnología, la defensa, la química, la industria y la electrónica. Incluso puede crecer aún más debido a la actual pandemia mundial de covid-19, considerada por muchos como una consecuencia de las amenazas ecológicas que plantea el capitalismo global (Ramonet, 2020; Harvey, 2020). Aunque la cuota de la ue en la extracción global de minerales metálicos es baja, en especial compa-

2 Para más información sobre el paradigma actual de la criticidad, véase Hayes y McCullough (2018). El cálculo de la ie se basa en la relevancia de los materiales específicos en las aplicaciones de uso final de la ue y en el rendimiento de los sustitutos disponibles; mientras que la rs se basa en la estimación del riesgo de una interrupción del suministro de determinados materiales (EC, 2017b).

3 La lista de materias primas críticas está disponible en https://ec.europa.eu/

rada con la producción latinoamericana y asiática, la extracción europea de hierro, aleaciones ferrosas y no ferrosas y metales preciosos ha ido aumentando lentamente en los últimos años (EIP, 2018: 8-29). Al mismo tiempo, la dependencia de las importaciones en la ue de minerales metálicos, que en general es elevada (EIP, 2018), ha seguido una trayectoria descendente desde 2009, con la crisis económica (Eurostat, 2018, Fig. 2). Pero es difícil saber qué parte de este descenso se relaciona con el despliegue de la Iniciativa sobre Materias Primas.

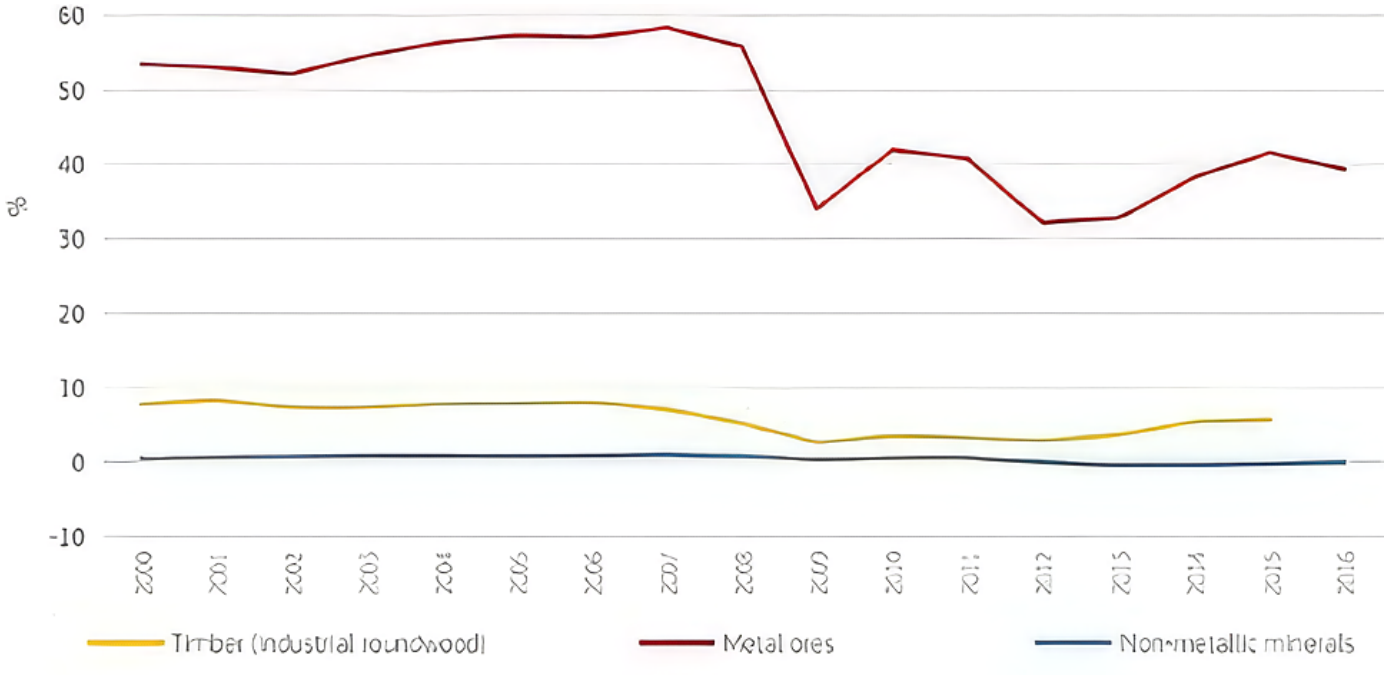
Es importante destacar que el mayor porcentaje de extracción de minerales en la ue corresponde a los minerales de construcción, un sector que experimentó un pico desde mediados de la década de los noventa hasta 2008, seguido de la extracción de minerales industriales. La extracción de minerales metálicos viene a continuación, mostrando un claro incremento a partir de 2009 (EIP, 2018: 42). Un dato clave para captar la creciente relevancia de la extracción de minerales metálicos en Europa es el significativo aumento de la inversión de las empresas inversoras en investigación y desarrollo de la UE entre 2006 y 2016, en torno a 75%. Dicho crecimiento fue más notable en el sector de los metales básicos, especialmente entre 2013 y 2016 (EIP, 2018: 44, Fig. 3).

Alrededor de trescientas empresas se dedican a la extracción de minerales metálicos en toda la ue, con Suecia a la cabeza de la extracción de mineral de hierro, y países como Polonia, Bulgaria, Finlandia, Suecia, Portugal, Austria, Irlanda y España aumentando sus actividades relacionadas con la extracción de minerales metálicos no ferrosos (Eurostat, 2018: 49). El Cuadro de Indicadores de Materias Primas de 2017 (EIP, 2018: 56; EC, 2011: 10) celebra la apertura de nuevas minas en Europa a partir de 2014: Bulgaria (plomo) y España (cobre), Italia, Finlandia o Rumanía. Su postura es clara, el potencial europeo para la minería y la extracción de minerales no se aprovecha y el presupuesto para las actividades de exploración sigue siendo bajo, lo que va en contra del desarrollo europeo en términos de crecimiento económico y empleo: "La Iniciativa sobre Materias Primas de la ue y la Asociación Europea para la Innovación en Materias Primas tienen como objetivo facilitar nuevas mejoras en las condiciones marco nacionales para la minería" (EIP, 2018: 57). Por tanto, estas dos iniciativas abogan de manera activa por lo que consideran

una política minera más estable y eficiente en medio de la diversidad reinante en los países europeos (CE, 2016).

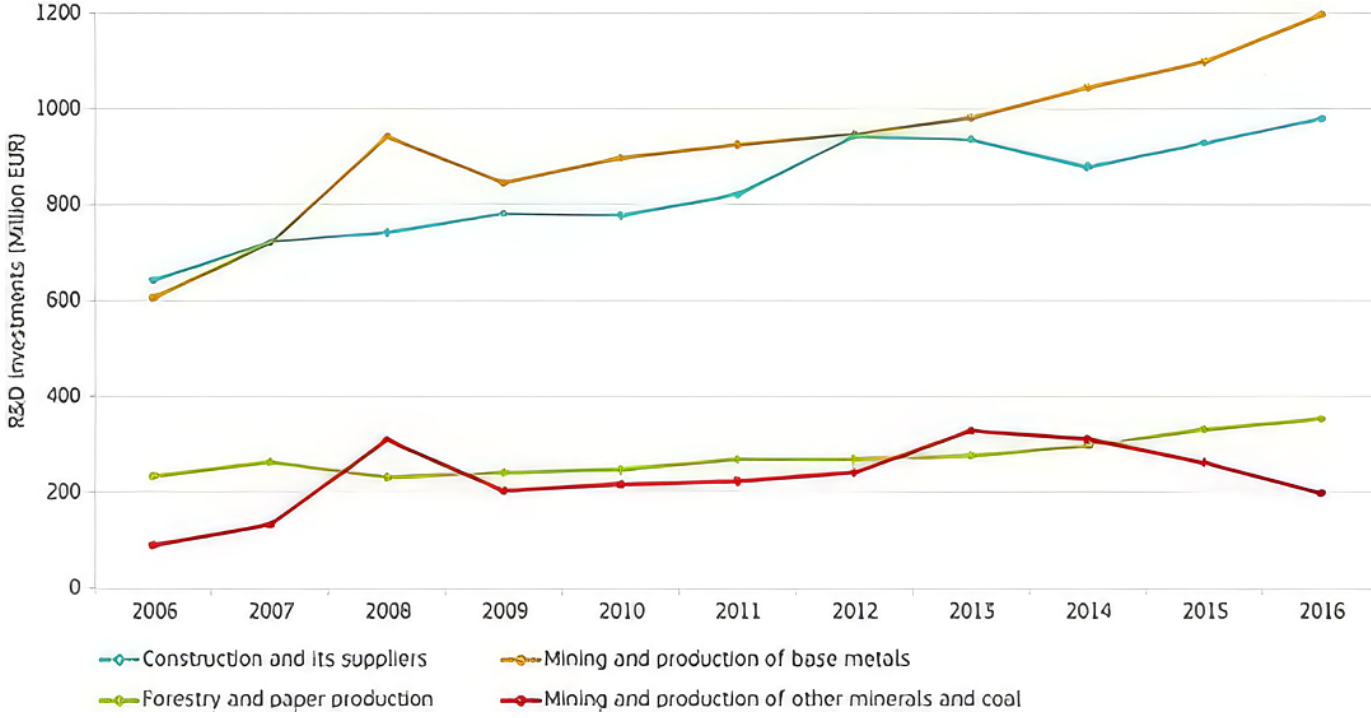
Para lograr una comprensión más profunda del desarrollo rural europeo contemporáneo, es crucial entender el nuevo marco legislativo y el énfasis en el autoabastecimiento de los crm. A pesar de la relevancia de este cambio político y su impacto en la transformación de las dinámicas rurales, este escenario cambiante aún no ha sido analizado en profundidad por las ciencias sociales. No obstante, hay un número significativo de casos de estudio que están surgiendo en toda Europa: minería y energía (Kesküla, 2016; Brock y Dunlap, 2018), minería y ambiente (Moreno *et al*., 2016; Velicu y Kaika, 2017; Apostolopoulou y Cortés-Vázquez, 2019; Velicu, 2019), y minería y conflicto social (Egresi, 2011; Vesalon y Cretan, 2015; Nilsson, 2010; Koivurova *et al*., 2015; Suopajärvi *et al*., 2016; Jensen y Sandström, 2019). Estos estudios ofrecen nuevas comprensiones dentro del marco proporcionado por la Iniciativa de las Materias Primas, y contribuyen a un enfoque exhaustivo y comparativo de un fenómeno complejo que se extiende de forma rápida por el continente.

Figura 2. Dependencia de las importaciones en la UE-28 para las materias primas en el estado inicial de la cadena de suministro.



Fuente: eip (2018: 34).

Figura 3. Inversión anual en I+D de las principales empresas inversoras con sede en la UE, por grupos de sectores de materias primas (UE-29, 2006-2016).



Fuente: EIP (2018: 48).

La crítica situación de abastecimiento de materias primas y el consiguiente crecimiento de la extracción de minerales metálicos que afecta a Europa, junto con la influencia de los nuevos modelos neoliberales extractivistas (Ye *et al*., 2020), tendrá un profundo impacto en el perfil siempre cambiante de sus zonas rurales. En medio de las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial, Europa explora nuevos enfoques para la explotación de sus recursos naturales, desplegando un paisaje emergente de minería metálica que tendrá consecuencias críticas para el mundo rural (Barbier, 2011; Berghäll y Perrels, 2010). Sin embargo, la expansión de estos nuevos paisajes de minerales metálicos en Europa no se ha discutido en los medios de comunicación y ha cogido a muchos por sorpresa. En particular, estos nuevos usos del paisaje están compitiendo con anteriores énfasis en la conservación, que, no obstante, siguen dirigiendo la política europea. ¿Cómo está interactuando el nuevo auge minero con el objetivo de "un alto nivel de protección y mejora de la calidad del ambiente", tal como determinan diferentes normativas de la UE (Langlet y Mahmoudi, 2016: 9-50)?

Europa y la conservación

Irónicamente, el mismo actor político que está generando oportunidades para el regreso de la minería a las zonas rurales de Europa lleva décadas transformando estas mismas zonas con políticas ambientales. A estas alturas de la historia, más de 18% del territorio europeo se encuentra bajo algún tipo de conservación, con 784 994 km^2 protegidos en el marco de Natura 2000 (eea, 2019; 2020). Este porcentaje es mucho mayor en las zonas rurales periféricas de Europa, una vez descontadas las zonas agrícolas urbanas, industriales y comerciales.

La Directiva Aves (1972) y la Directiva Hábitat (1992) convirtieron a la UE en un actor importante con responsabilidad en la transformación del mundo rural al reservar zonas para la conservación del ambiente. La expansión de la minería desembocará necesariamente en una confrontación con estas dos vías potenciales de desarrollo. Para comprender el impacto de este empuje minero crítico en las zonas rurales de Europa, es esencial analizar también su confrontación con el denso marco normativo ambiental

que sustentaba el paradigma de la conservación que desde los años setenta se expandió por todo el continente: el nuevo régimen ambiental de la Comunidad Europea (Hildebrand, 1992; Jordan, 2005). Dentro de este régimen, la conservación y las cuestiones proteccionistas se convirtieron en una de las prioridades políticas de la ue (MacCormick, 2001). Sin embargo, este marco ambiental no se limita a la conservación territorial. Por medio del Programa de Acción Medioambiental de la UE (2002), integra consideraciones de sostenibilidad y gestión racional, como las normas de permiso e inspección en todo tipo de ámbitos (Langlet y Mahmoudi, 2016).[4]

El papel de la conservación como herramienta clave del desarrollismo ha combinado el esfuerzo preservacionista con el de la gestión económica. El turismo del patrimonio natural y cultural son sectores económicos fundamentales de la Europa rural (Wilson, 2007; Bell y Jayne, 2010; Woods y McDonagh, 2011; Santamarina y Bodí, 2013; Ana, 2017). Esta integración de conservación, turismo, sostenibilidad y desarrollo local ha dado lugar a un proceso de mercantilización de la naturaleza (Castree, 2003; Igoe y Brockington, 2007). Sin embargo, el capitalismo global se manifiesta de formas muy diferentes en lugares distintos. Con el desembarco de la minería, la economía política de muchas zonas rurales europeas está a punto de experimentar una transformación radical. Desde una perspectiva política, este nuevo régimen minero, con una huella tanto legal como socioecológica, surge en fricción directa con el paradigma ambiental anterior (Agrawal, 2005; Tsing, 2005). El extractivismo, centrado en el agua, la energía o los minerales, por la escala de sus operaciones y las inversiones necesarias, es un tipo de actividad manejada por grandes corporaciones que, al implantarse, transforma radicalmente la gobernanza y las políticas locales (Van der Ploeg *et al*., 2015; Ye *et al*., 2020). Esta fricción, estas diferencias fundamentales, entre conservación y minería, desvelan contradicciones radicales del marco de políticas públicas vigente, tanto a escala nacional como europea.

4 Algunos ejemplos son la *Directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas* (2006/21/ce), la *Directiva sobre responsabilidad medioambiental* (2004/35/ce), la *Directiva marco del agua* (2000/60/ce) y la *Directiva de aguas subterráneas* (2006/118/ ce), la *Directiva marco sobre la estrategia marina* (2008/56/ce), la *Estrategia de* la ue *sobre el uso sostenible de los recursos naturales o el principio de precaución* (CE, 2011: 27).

La pugna entre las políticas de conservación y ambiente y el nuevo impulso por las materias primas críticas se hace patente en varios documentos e informes elaborados recientemente por la Comisión Europea (CE): la *Comunicación final de la Comisión sobre la iniciativa de las materias primas - cubrir nuestras necesidades críticas de crecimiento y empleo* (EC, 2008), las *Orientaciones de la ce sobre la realización de actividades extractivas no energéticas de conformidad con los requisitos de Natura 2000* (EC, 2011) o el *Proyecto Minlex* (CEC, 2016). En algunos aspectos, estos documentos abogan, de forma sutil y no tan sutil, por una revisión de las tendencias políticas anteriores centradas en la protección ambiental, y son una consecuencia probable de las tensiones internas de la UE. El lenguaje empleado y los objetivos explícitos que identifican estos documentos son una clara señal de los cambios en los discursos y la dinámica política de la Unión, y anticipan una futura confrontación económica y moral más amplia. Mientras que durante la década de los noventa el Banco Mundial tomó la iniciativa en su lucha contra las restricciones de los Estados del Sur global a la inversión extranjera y a la extracción de recursos naturales (cf. Moody, en Kirsch, 2014), a principios del nuevo siglo la presión para desregular y privatizar muchos sectores mineros en todo el mundo fue ejercida por el Fondo Monetario Internacional (Jacka, 2018: 64). Durante ese periodo, Europa siguió siendo en algunos aspectos un enclave conservacionista con políticas pioneras de protección ambiental integradas en el resto de políticas comunitarias (artículo 11 del TFUE, cf. Langlet y Mahmoudi, 2016), una tendencia que podría verse directamente amenazada en los años venideros.

En la *Iniciativa sobre materias primas* (EC, 2008), la Comisión concede que la aplicación de la legislación Natura 2000, que protege de la explotación amplias zonas de los paisajes rurales europeos, compite de forma directa en algunos aspectos con las industrias extractivas, y subraya que la referida legislación no excluye por completo las operaciones extractivas: "...la Comisión y los Estados miembros se han comprometido a elaborar directrices para la industria y las autoridades con el fin de aclarar cómo pueden conciliarse las actividades de extracción en las zonas Natura 2000 o en sus proximidades, con la protección del medio ambiente" (EC, 2008: 9-10) o "racionalizar las

condiciones administrativas y acelerar el proceso de concesión de permisos para las actividades de exploración y extracción" (EC, 2008: 9). En otras palabras, el nuevo marco jurídico que pretende promover la minería surge ya en diálogo directo y explícito con un régimen jurídico anterior que se centraba en la preservación del ambiente. El documento también establece que la planificación del uso del suelo debe tener en cuenta el acceso a los yacimientos de materias primas. En la misma línea, en 2011 un documento de la ue reflexionaba sobre las interacciones entre Natura 2000 y las industrias extractivas no energéticas (neei, por sus siglas en inglés). En él, la ue, por medio de la colaboración del Grupo de Trabajo de la ue (representantes de los sectores industriales, expertos y organizaciones no gubernamentales), trataba de desarrollar directrices estratégicas sobre "cómo pueden minimizarse o evitarse por completo los impactos potenciales de las actividades extractivas sobre la naturaleza y la biodiversidad" (EC, 2011: 4).

En medio de los efectos potenciales de las industrias extractivas sobre la biodiversidad, este último documento reconoce las posibles consecuencias perjudiciales de la pérdida y degradación de los hábitats, la perturbación de las especies y los desplazamientos, y afirma la necesidad de evitar, o al menos mitigar, los daños más relevantes. Estos podrían ser causados por las prácticas más habituales de las industrias extractivas, como el desmonte de tierras, la perturbación hidráulica (alteración de las condiciones hidrológicas y cambios en la calidad del agua), los cambios en el hábitat que pueden promover la colonización de especies invasoras, el ruido y las vibraciones o las perturbaciones relacionadas con el movimiento, el polvo, los corrimientos de tierras y los colapsos. El documento establece la necesidad de determinar si los efectos potenciales son significativos o no (EC, 2011: 37), y en el caso de que se consideren así, desarrolla la idea de "razones imperiosas de interés público de primer orden (IROPI, siglas en inglés)", tal como se expresa en el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva Hábitats, incluso a pesar de las evaluaciones negativas (EC, 2011: 48). Estos imperativos pueden ser de naturaleza social o económica y deben adoptarse medidas compensatorias cuando proceda (EC, 2018b). De hecho, el artículo 6 de la Directiva de Hábitats propuesto por la Comisión Europea fue llevado ante el Tribunal por los Estados miembros (Caso c-57/89). En este caso, el Tribunal falló a favor de

los Estados miembros permitiéndoles reducir o limitar zonas protegidas en nombre de un interés general, especificando que los requisitos económicos y recreativos no debían considerarse prioritarios (Kräämer, 2009: 60). No obstante, los Estados miembros consideraron que la prohibición era demasiado estricta e incluyeron en el artículo 6 la posibilidad de limitar la protección en una zona designada como hábitat por motivos económicos y sociales. En su análisis de los dictámenes de la Comisión en virtud del apartado 4 del artículo 6, Krämer sostiene que la exploración de alternativas por parte de los Estados miembros para evitar daños graves en las zonas protegidas no siempre se toma con la suficiente seriedad, y que por lo regular no se entabla un debate intenso sobre si los iropi son en realidad imprescindibles para validar el menoscabo de las zonas protegidas. A la luz de las nuevas prioridades establecidas en el marco de la *Iniciativa sobre materias primas* que se ha comentado antes, es fácil argumentar que las materias primas críticas son cruciales para ampliar la expansión minera en las zonas rurales, ya que a menudo se consideran de "interés público superior".

En la misma línea, el *Estudio sobre el marco jurídico de los procedimientos de extracción y concesión de permisos para la exploración y explotación en la UE* (Proyecto Minlex, EC, 2016), un documento clave que evalúa la variabilidad de las prácticas y contrataciones entre los Estados miembros, constata que la libertad de establecimiento y de prestación de servicios son dos principios básicos del mercado interior en la Unión y no siempre están garantizados por igual en todos los Estados. Este estudio, elaborado por MinPol y sus socios,[5] es quizá el intento más directo de proporcionar fundamentos para superar lo que consideran "varias cuestiones que restringen los procedimientos de concesión de permisos y actúan en contra de la igualdad de condiciones para el sector NEEI" dentro del marco jurídico de la ue para la exploración y para la explotación de minerales no energéticos (EC, 2016: IX). Entre otras cosas, el estudio denuncia la existencia de enfoques "excesivamente restrictivos" en la aplicación de las disposiciones de las Directivas por parte de los Estados miembros" denunciados por la industria (EC, 2016: X, así como informa

5 MinPol - Agencia para la Política Minera Internacional, es una sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) de derecho austriaco. Su lema es: "Los recursos minerales son nuestra pasión". Más información: http://www.minpol.com/index2.html

de su preocupación por los recursos "porque, aunque garantizan el derecho de acceso a la justicia, a menudo provocan procedimientos de concesión de permisos excesivamente largos, costosos e impredecibles para los inversores potenciales, y también para las autoridades encargadas de conceder los permisos y otras partes interesadas. Consideramos que evitar que los casos lleguen a las instancias judiciales parece ser una de las mejores formas de evitar retrasos innecesarios en los procedimientos de concesión de permisos" (EC, 2016: X). Ye *et al*. (2020: 161) subrayan que los organismos estatales suelen ser cruciales para facilitar la absorción de la industria minera mediante el establecimiento de marcos jurídicos y de infraestructuras. Por tanto, la *Iniciativa de las materias primas*, a través de sus diversos resultados, documentos e informes, podría considerarse un paso fundamental para establecer el marco jurídico que permita el acaparamiento de tierras con minerales metálicos en las zonas rurales europeas, haciendo caso omiso de anteriores esfuerzos de conservación. La minería de metales se impulsa desde las altas esferas políticas europeas persiguiendo un objetivo concreto: aumentar la autosuficiencia como aspecto crítico de la competitividad industrial y técnica europea. Curiosamente, la Unión Europea aboga por la autosuficiencia al tiempo que apuesta con toda claridad por una agenda neoliberal (Harvey, 2005; Laval y Dardot, 2014).

La ruralidad se ha asociado de forma tradicional a procesos de declive, despoblación y marginación (Cloke, 1990; Woods, 2012), en muchos casos apuntalados por supuestos teleológicos negativos de la evolución rural. Pero la exageración del declive rural y el etiquetado del campo como "vacío" también se han considerado metáforas útiles para allanar el camino a nuevos procesos de desposesión (Franquesa, 2018). Ciertos programas y legislaciones de distintos países tienen como objetivo las zonas del interior como "bancos de recursos" de donde apoderarse de los bienes naturales y culturales para ponerlos al servicio de las poblaciones urbanas (Li, 2009; Markey *et al*., 2008; Del Mármol y Vaccaro, 2015). Esto se hace sin tener en cuenta las dinámicas y necesidades locales tanto de los habitantes rurales como de sus paisajes. El avance de la era mineral en toda Europa puede implicar una exacerbación de un proceso de "colonialismo interior" proyectado sobre las zonas rurales que por tradición han sufrido un subdesarrollo persistente y una sobreexplotación

de los recursos locales para satisfacer las demandas urbanas (Borras *et al*., 2011; Martínez-Alier *et al*., 2016). Los elevados niveles de variabilidad del valor de los productos básicos, sometidos a grandes fluctuaciones debido a las cambiantes condiciones mundiales, las variaciones económicas y la disponibilidad, hacen que los modos de producción extractivos sean en extremo frágiles e inestables, por lo que socavan potencialmente las posibilidades locales de reproducción económica y social (Bunker, 1984; Vaccaro *et al*., 2016). La parcelación de los territorios rurales en términos de activos identificables, donde las materias primas críticas, los recursos naturales o el patrimonio cultural se singularizan como mercancías, haciendo caso omiso del arraigo de la vida social, cultural y natural, es un ejemplo clásico del enfoque selectivo de la producción aplicado por la industria extractiva en particular y el capitalismo global en general.

Paralelismos con el Sur global

El extractivismo y los temas relacionados, como las prácticas corporativas, los efectos sociales y ambientales y las relaciones cambiantes, las transformaciones bruscas en los medios de vida, etc., han sido ampliamente estudiados en el Sur global, sobre todo en América Latina, África y Asia (Bebbington y Humphreys, 2018; Gudynas, 2015; Jacka, 2018; Kirsch, 2014; Pijpers y Eriksen, 2019; Studnicki-Gizbert, 2016). El rico potencial de este campo de investigación provee numerosos ejemplos de la actual expansión de los movimientos sociales y las coaliciones que se enfrentan y resisten a los impactos de la minería y otros megaproyectos que acompañan a la expansión de las infraestructuras en varias zonas del mundo (Hornborg y Martínez-Alier, 2016; Silva *et al*., 2018; Apostolopoulou y Cortés-Vázquez, 2019). Si el extractivismo en el Sur global implica un proceso de progresiva esterilización socioecológica, manifestada en el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación del agua y el suelo, la destrucción del entorno natural, la alteración de las relaciones sociales locales, el desempleo y el desplazamiento de la población local (Ballard y Banks, 2003; Ye *et al*. 2020), la actual expansión de la minería metálica en Europa requiere un análisis crítico vigilante y permanente.

La minería se ha presentado a menudo como parte integrante del proyecto de la modernidad, junto con la industrialización y el desarrollo. La minería integra

la localidad a la modernidad, a las redes globales de distribución y consumo, pero sus secuelas, cuando las minas cierran, suelen dar lugar a un nuevo nivel de periferización. El estudio de Ferguson sobre el Cinturón de Cobre de Zambia analiza la desposesión y desconexión que sufrieron los trabajadores locales al enfrentarse a la experiencia de "ser empujados a un lado" (1999: 2002) cuando el mercado global impuso un súbito proceso de desindustrialización. En el Sur global, el extractivismo suele formar parte del proyecto colonial, como modo de producción económica que explota los recursos naturales y desvía los beneficios de las economías periféricas. Bunker se refiere a las regiones con "modos de producción extractivos" basados en las materias primas como "periferias extremas", debido a las "proporciones extremadamente bajas de capital y trabajo incorporadas al valor total de sus exportaciones" (1984: 1020). Con los últimos veinte años de mejoras técnicas y de ingeniería en la industria minera, los suministros locales de mano de obra son aun menos relevantes. Además, el rápido desarrollo de infraestructuras, carreteras e instalaciones cerca de los recursos naturales hizo que estos proyectos volátiles estuvieran destinados a un rápido abandono una vez agotados los recursos (Vaccaro y Beltrán, 2010). Algunos investigadores llevan tiempo advirtiendo de que el proyecto neoliberal que, de la mano de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Goldman, 2005), se había desbocado por el Sur global (desmantelamiento del estado y la disminución de derechos civiles, laborales y ambientales) estaba en proceso de implantarse en el Norte, una vez solucionado el problema poscolonial (Comaroff y Comaroff, 2012; Vaccaro *et al*., 2019).

Estos debates sobre el extractivismo pueden servir para avanzar y ampliar los conocimientos contemporáneos sobre la transición rural en Europa. Las definiciones de extractivismo acuñadas según la experiencia en el Sur global destacan la monopolización de los recursos, las estrechas relaciones entre Estados y corporaciones y la satisfacción de necesidades concretas de infraestructura (como puertos, redes de transporte, estabilidad política, relaciones específicas de capital/trabajo, etc.) como aspectos fundamentales de la articulación de estos modos de extracción (Bunker, 1984; Gudynas, 2013). El descuido de las condiciones locales de reproducción, tanto en términos sociales como naturales, y el enfoque en la

maximización de la producción convierten al extractivismo en un proceso destructivo (Ye *et al*., 2020: 157).

A pesar de ello, los grupos de presión empresariales que actúan en Europa abogan por los crecientes beneficios que genera la industria minera, recurriendo tanto a los beneficios económicos y laborales como a la milenaria cultura minera de la historia europea, y construyen una narrativa particular sobre el patrimonio minero del continente (cf. Mining Journal, 2018). La inversión en minería se ha fomentado una vez más como una forma de salir de la depresión económica y un potencial desencadenante de crecimiento y desarrollo en las comunidades rurales de toda Europa Occidental (cf. EIP, 2018). Este enfoque se ofrece junto a descripciones minimalistas y blanqueadas de un nuevo sector minero preocupado por las cuestiones éticas y la explotación sostenible de los recursos naturales (cf. EC, 2011; IGF, 2013; ccsi *et al*., 2016). Las empresas mineras y los grupos de presión que actúan en todo el mundo difunden narrativas de nuevo cuño sobre el desarrollo tecnológico y los modos de producción innovadores que prometen una mejor responsabilidad social corporativa y prácticas sostenibles. Sin embargo, como ya se ha comentado, estudios recientes demuestran que puede ocurrir lo contrario (Gudynas, 2013; Kirsch, 2014; Smith y Kirsch, 2018). La idea de una "maldición de los recursos" desarrollada en el seno de los debates económicos (Auty, 1994), surge de la amplia gama de estudios realizados en el Sur global, y debe tenerse en cuenta al analizar el reciente impulso de la minería de minerales metálicos en Europa. A pesar de la larga y mayoritariamente negativa experiencia del extractivismo en el extranjero (Martínez-Alier, 2002; Gudynas, 2015), la promesa de modernidad por medio de la minería sigue operando dentro de los imaginarios europeos contemporáneos de desarrollo, sobre todo principalmente entre los discursos corporativos y políticos.

Conclusión

En este trabajo analizamos cómo el nuevo énfasis europeo en el autoabastecimiento de minerales críticos para las industrias verdes emergentes está creando una situación de coexistencia entre la nueva minería y una agenda

conservacionista que, hasta la fecha, había dominado los proyectos de desarrollo local. En el futuro, el cambio rural parece destinado a mostrarse como una versión compleja e híbrida en la que el conservacionismo, el turismo y el extractivismo se reparten el protagonismo. El análisis textual de las políticas relacionadas con la expansión de la minería de metales en Europa y de la interacción de estas normas con otros cuerpos legislativos, directivas y reglamentos relevantes sobre zonas protegidas y desarrollo rural nos ha permitido identificar las posibles zonas de fractura y colisión entre proyectos sociales que, de entrada, se nos aparecen como claramente antagónicos. Nuestro objetivo ha sido poner el foco en la minería metálica actual en Europa con el fin de construir una comprensión más amplia de la dinámica rural contemporánea en Europa, analizando un cuerpo emergente de políticas que contribuirán a redefinir los paradigmas del cambio rural.

Hasta hace poco, las políticas de conservación y la promoción del turismo eran los marcos casi exclusivos bajo los cuales se repensaban las posibilidades de las zonas periféricas de la Europa rural. Durante cuarenta años, la revaloración de los paisajes rurales se ha producido mediante la reconceptualización de sus recursos culturales y naturales. Por un lado, el giro hacia la conservación permitió una lógica de mercantilización, desarrollando un marco proteccionista a la vez que rentable. Varios autores han debatido ya cómo la cultura y la naturaleza se convirtieron en nuevas fuentes económicas a explotar dentro de los nuevos regímenes patrimoniales (Bendix *et al*., 2012). Por otro lado, durante años, el esfuerzo conservacionista ha proporcionado también un marco de gobernanza para las zonas rurales y sus habitantes. Este paradigma sigue vigente, pero empieza a compartir su dominio con el énfasis emergente en la autosuficiencia (energética, mineral o hídrica). Esto parece preparar una nueva oleada de acaparamientos críticos de tierras, públicas o privadas (con beneplácito institucional). La expansión de dinámicas extractivistas por toda Europa, como el crecimiento de la minería metálica, podría convertirse en el último capítulo del cambio rural europeo.

No deberíamos concluir este ensayo sin mencionar que en los dos últimos años un nuevo factor, que ya existía, pero que se ha exacerbado, ha añadido presión adicional a la expansión de la minería metálica. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en 2022, y la escalada de violencia en

Oriente Próximo han disparado una era de inseguridad energética y una nueva carrera armamentística a la que la mayoría de los países de la Unión Europea se ha incorporado con empeño. "En el contexto del Foro económico mundial de la semana pasada, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus iniciales en inglés), Faith Birol, especificó que el motor más importante de la transición energética es ahora la "seguridad energética" antes que el cambio climático" (Blondeel, 2023: 1).

La minería es siempre un fenómeno de un potencial perturbador que afecta profundamente a la dinámica sociocultural y la economía política en la producción de lugares (Bebbington y Humphreys, 2018). En los próximos años, la extracción de minerales críticos puede alterar de forma radical el escenario socioeconómico europeo y podría tener un impacto crucial en el desarrollo futuro a corto plazo de sus zonas rurales. A pesar de la potencial relevancia y la creciente incidencia de las actividades mineras en Europa, de su profundo impacto en el desarrollo de las zonas rurales y en los debates sobre sostenibilidad, las ciencias sociales siguen más centradas en el análisis del extractivismo y las políticas mineras en el Sur global. Existe una clara necesidad de reavivar el campo de los estudios sobre el extractivismo en Europa y en los países occidentales en general, siendo como es un área esencial de los recientes giros políticos hacia una soberanía de las materias primas.

Referencias

Agrawal, A. (2005). *Environmentality: technologies of government and the making of subjects*. Duke University Press.

Akram-Lodhi, A. y C. Kay. (2010). Surveying the agrarian question: current debates and beyond. *The Journal of Peasant Studies*, *37*(2), 255-284.

Ana, M. (2017). Ecotourism, agro-tourism and rural tourism in the European Union. *Cactus Tourism Journal*, *15*(2), 6-14.

Apostolopoulou, E. y J. A. Cortés-Vázquez (eds.). (2019). *Rights to nature: tracing alternative political ecologies to the neoliberal environmental agenda*. Routledge.

Arsel M., B. Hogenboom y L. Pellegrini. (2016). The extractive imperative in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, *3*, 880-887.

Auty, R. M. (1994). Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: the resource curse thesis. *World Development*, *22*(1), 11-26.

Bainton, N., Kemp, D., Lèbre, E., Owen, J. R. y G. Marston. (2021). The energy-extractive nexus and the just transition. *Sustainable Development*, DOI: 10.1002/sd.2163

Ballard, C. y Banks, G. (2003). Resource wars: the anthropology of mining. *Annual Review of Anthropology*, *32*(1), 287-313.

Banco Mundial. (2018). *Special focus: the changing of the guard: shifts in commodity demand*. http://documents.worldbank.org/curated/en/678081540845321639/Commodity-Markets-Outlook-The-Changing-of-the-Guard-Shifts-in-Commodity-Demand

Banco Mundial. (2019). *Commodity markets outlook*. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Banco Mundial. (s.f.). *Shifts in industrial commodity demand*. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Barbier, E. (2011). The policy challenges for the green economy and sustainable economic development. *Natural Resources Forum*, *35*, 233-245.

Barume, B., U. Naeher, D. Ruppen y P. Schütte. (2016). Conflict minerals (3TG): mining production, applications and recycling. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, *1*, 8-12.

Bebbington, A. y D. Humphreys. (2018). Mining, movements and sustainable development: concepts for a framework. *Sustainable Development*, *26*(5), 441-449.

Bell, D. y M. Jayne. (2010). The creative countryside: policy and practice in the uk rural cultural economy. *Journal of Rural Studies*, *26*, 209-218.

Bendix, R., A. Eggert y A. Peselmann (eds.). (2012). *Heritage regimes and the state.* Göttingen University Press.

Berghäll, E. y A. Perrels. (2010). *The economic crisis and its consequences for the environment and environmental policy*. Nordic Council of Ministers.

Bernstein, H. (2017). Political economy of agrarian change: some key concepts and questions. *rudn Journal of Sociology*, *17*(1), 7-18.

Bernstein, H. y T. Byres. (2001). From peasant studies to agrarian change. *Journal of Agrarian Change*, *1*(1), 1-56.

Blondeel, M. (2023). A place of greater safety? The eu's energy security during the clean tech race. *gies ocassional paper. The glogal energy crisis*. https://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/gies/en/research/publications/gies_papers/2023-global-energy-crisis/pdf-files/12-a-place-of-greater-safety-mathieu-blondeel.pdf

Borras, S. M., R. Hall, I. Scoones, B. White y W. Wolford. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction. *Journal of Peasant Studies*, *38*(2), 209-216.

Brautigam, D. (2009). *The dragon's gift: the real story of China in Africa*. Oxford University Press.

Brock, A. y A. Dunlap. (2018). Normalising corporate counterinsurgency: engineering consent, managing resistance and greening destruction around the Hambach coal mine and beyond. *Political Geography*, *62*, 33-47.

Bunker, S. (1984). Modes of extraction, unequal exchange, and the progressive underdevelopment of an extreme periphery: the Brazilian Amazon, 1600-1980. *American Journal of Sociology*, *89*(5), 1017-1064.

Büscher, B., S. Sullivan, K. Neves, J. Igoe y D. Brockington. (2012). Towards a synthesized critique of neoliberal biodiversity conservation. *Capitalism Nature Socialism*, *23*(2), 4-30.

Buu-Sao, D., S. Chailleux y S. Le Berre. (2023). Ecological crisis and green capitalism: toward a climatization of extractive industries? *Review of Agricultural, Food and Environmental Studies*, *105*(1), 17-43.

Castán Broto, V. y M. Sanzana Calvet. (2020). Sacrifice zones and the construction of urban energy landscapes in Concepción, Chile. *Journal of Political Ecology*, *27*(1), 279-299.

Castree, N. (2003). Commodifying what nature? *Progress in Human Geography*, *27*(3), 273-297.

ccsi (Columbia Center on Sustainable Investment), un Sustainable Development Solutions Network (sdsn), United Nations Development Programme (undp), World Economic Forum (wef) (eds.). (2016). *Mapping mining to the development goals: an atlas*. http://unsdsn.org/resources/publications/mapping-mining-to-the-sustainable-development-goals-an-atlas/

Cloke, P. (1990). Rural geography and political economy. En R. Peet y N. Thrift (eds.), *New models in geography* (164-197). Unwin Hyman

Comaroff, J. y J. Comaroff. (2012). Theory from the South: or how Euro-America is evolving toward Africa. *Anthropological Forum*, *22*(2), 113-132.

Cox, C. y J. Kynicky. (2017). The rapid evolution of speculative investment in the ree market before, during, and after the rare earth crisis of 2010-2012. *The Extractive Industries and Society*, *5*(1), 8-17.

Cronon, W. (1996). The trouble with wilderness: or, getting back to the wrong nature. *Environmental History*, *1*(1), 7-28.

Cuddington, J. y D. Jarret. (2008). Super-cycle in real metal prices? *Imf Staff Papers*, *55*(4), 541-565.

Davies, T. (2019). Slow violence and toxic geographies: "out of sight" to whom? *Environment and Planning C: Politics and Space*, *40*(2), 409-427.

EC (European Commission). (2008). *699 final communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The*

raw materials initiative. Meeting our critical needs for growth and jobs in Europe. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0699&from=EN

EC (European Commission). (2010). *Critical raw materials for the eu. Report of the ad-hoc working group on defining critical raw materials*. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/rawmaterials/documents/index_en.htm

EC (European Commission). (2011). *EC guidance on undertaking new non-energy extractive activities in accordance with Natura 2000 requirements*. Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm

EC (European Commission). (2016). *Minlex project. Study - Legal framework for mineral extraction and permitting procedures for exploration and exploitation in the eu. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and smes Raw Materials.* Publications Office of the European Union. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/18c19395-6dbf-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en

EC (European Commission). (2017a). *COM(2017) 490 Final communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 2017 list of critical raw materials for the eu*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN

EC (European Commission). (2017b). *Study on the review of the list of critical raw materials criticality assessments*. http://hytechcycling.eu/wp-content/uploads/Study-on-the-review-of-the-list-of-Critical-Raw-Materials.pdf

EC (European Commission). (2018). *Commission Noticen 2018. 7621 final, Brussels, 21.11.2018 Managing Natura 2000 sites – The provisions of Article 6 of the "Habitats" Directive 92/43/EEC*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019 XC0125(07)

EEA (European Environmental Agency). (2019). *The European environment — state and outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe*. https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

EEA (European Environmental Agency). (2020). Natura 2000 sites designated under the eu habitats and birds directives. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sites-designated-under-the-eu-3/assessment

Egresi, I. (2011). The curse of the gold: discourses surrounding the project of the largest pit-mine in Europe. *Human Geographies*, *5*(2), 57-68.

EIP (European Innovation Partnership on Raw Materials). (2018). *Raw materials Scoreboard. European Commission, Joint Research Centre*. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/117c8d9b-e3d3-11e8-b690-01aa75ed71a1

Erten, B. y J. Ocampo (2013). Super cycles of commodity prices since the mid-nineteenth century. *World Development*, *44*(C), 14-30.

Eurostat. (2018). *Economy-wide material flow accounts. Handbook*. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9117556/KS-GQ-18-006-EN-N.pdf/b621b8ce-2792-47ff-9d10-067d2b8aac4b

Eurostat. (2019). *Mining and quarrying statistics - Nace Rev. 2*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/10085.pdf

Ferguson, J. (1999). *Expectations of modernity: myths and meanings of urban life on the Zambian Copperbelt*. University of California Press.

Ferry, E. E. (2002). Inalienable commodities: the production and circulation of silver and patrimony in a mexican mining cooperative. *Cultural Anthropology*, *17*(3), 331-358.

Fox, J. (1999). Mountaintop removal in West Virginia: an environmental sacrifice zone. *Organization & Environment*, *12*(2), 163-183.

Franquesa, J. (2018). *Power struggles: dignity, value, and the renewable energy frontier in Spain*. Indiana University Press.

Franquesa, J. (2020). Haciendo y deshaciendo baldíos: dinámicas de valor y conflictos energéticos en la Cataluña sur. *Revista Andaluza de Antropología*, *18*, 77-97.

Fraser, A. y M. Larmer (eds.). (2010). Zambia, mining, and neoliberalism: boom and bust on the globalized copperbelt. Palgrave Macmillan.

Goldman, M. (2005). *Imperial nature: the World Bank and struggles for social justice in the age of globalization*. Yale University Press.

Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. *Observatorio del Desarrollo, claes*, *18*, 1-17.

Gudynas, E. (2015). *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*. Claes.

Halfacree, K. (1999). A new space or spatial effacement? Alternative futures for the post-productivist countryside. En N. Walford, D. Everitt y J. Napton (eds.), *Reshaping the countryside: perceptions and processes of rural change* (pp. 67-76). cab International.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2020). Anti-capitalist politics in the time of covid-19. *Jacobin*. https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions

Hayes, S. y E. McCullough. (2018). Critical minerals: a review of elemental trends in comprehensive criticality studies. *Resources Policy*, *59*, 192-199.

Hildebrand, P. (1992). The European community's environmental policy, 1957 to "1992": from incidental measures to an international regime? *Environmental Politics*, *1*(4), 13-44.

Holifield, R. y D. May. (2017). A framework for a critical physical geography of "sacrifice zones": physical landscapes and discursive spaces of frac sand mining in Western Wisconsin. *Geoforum*, *85*, 269-279.

Hornborg, A. y J. Martínez-Alier (eds.). (2016). Ecologically unequal exchange and ecological debt. *Journal of Political Ecology*, *23*, 328-491.

igf (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development). (2013). *igf mining policy framework. Mining and sustainable development.* https://www.igfmining.org/mining-policy-framework/framework/

Igoe, J. (2010). The spectacle of nature in the global economy of appearances: anthropological engagements with the spectacular mediations of transnational conservation. *Critique of Anthropology*, *30*(4), 375-397.

Igoe, J. y D. Brockington. (2007). Neoliberal conservation: a brief introduction. *Conservation and Society*, *5*(4), 432-449.

Jacka, J. (2018). The anthropology of mining: the social and environmental impacts of resource extraction in the mineral age. *Annual Review of Anthropology*, *47*(1), 61-77.

Jasanoff, S. (2018). Just transitions: a humble approach to global energy futures. *Energy Research & Social Science*, *35*, 11-14.

Jensen, T. y J. Sandström. (2019). Organizing rocks: actor–network theory and space. *Organization*, *27*(4), 511-528.

Jordan, A. (ed). (2005). *Environmental policy in the European Union. Actors, institutions, and processes.* Earthscan.

Kesküla, E. (2016). Temporalities, time and the everyday: new technology as a marker of change in an Estonian mine. *History and Anthropology*, *27*(5), 521-535.

Kirsch, S. (2014). *Mining capitalism: the relationship between corporations and their critics.* University of California Press.

Klein, N. (2014). *This changes everything: capitalism vs. the climate.* Simon and Schuster

Koivurova, T., A. Buanes, L. Riabova, L. Didyk V. y Ejdemo T. (2015). Social license to operate: a relevant term in Northern European mining? *Polar Geography*, *38*(3), 194-227.

Krämer, L. (2009). The European Commission's opinions under Article 6(4) of the Habitats Directive. *Journal of Environmental Law*, *21*(1), 59-85.

Langlet, D. y S. Mahmoudi. (2016). *eu environmental law and policy*. Oxford University Press.

Laval, C. y P. Dardot. (2014). *La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Gedisa.

Lerner, S. (2010). Sacrifice zones: the front lines of toxic chemical exposure in the United States. mit Press.

Li, T. (2009). To make live or let die? Rural dispossession and the protection of surplus populations. *Antipode*, *41*, 66-93.

Li, Y., H. Westlund y Y. Liu. (2019). Why some rural areas decline while some others not: an overview of rural evolution in the world. *Journal of Rural Studies*, *68*, 135-143.

Markey, S., G. Halseth y D. Manson. (2008). Challenging the inevitability of rural decline: advancing the policy of place in northern British Columbia. *Journal of Rural Studies*, *24*, 409-421.

Mármol, C. del. (2016). *Muntanyes de formatge. Transformacions productives i patrimonialització a l'Urgellet i el Baridà*. Generalitat de Catalunya.

Mármol, C. del, G. Celigueta y I. Vaccaro. (2018). Socioeconomic transitions and everyday life changes in the rural world: Pyrenean households and their contemporary economic history. *Journal of Agricultural Change*, *18*(3), 677-693.

Mármol, C. del e I. Vaccaro. (2015). Changing ruralities: between abandonment and redefinition in the Catalan Pyrenees. *Anthropological Forum*, *25*(1), 21-41.

Marsden, T., J. Murdoch, P. Lowe, R. Munton y A. Flynn. (1993). *Constructing the Countryside*. ucl Press.

Martínez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar.

Martínez-Alier, J., F. Demaria, L. Temper y M. Walter. (2016). Changing social metabolism and environmental conflicts in India and South America. *Special Section of the Journal of Political Ecology*, *23*, 467-491.

MacCormick, J. (2001). Environmental policy in the European Union. Palgrave Macmillan.

Mining Journal. (2018). Spain's mining bull-run. https://www.mining-journal.com/discovery/news/1346989/spains-mining-bull-run

Moreno, I., F. Talego, I. Hernandéz y C. González. (2016). Modifican los desastres ambientales mineros la actitud de las poblaciones locales antes nuevas minas? En *Conflitos ambientais na Indústria mineira e metalúrgica* (215-242). CETEM / MCTIC.

Narotzky, S. (2016). Where have all the peasants gone? *Annual Review of Anthropology*, *45*(1), 301-318.

Nilsson, B. (2010). Ideology, environment and forced relocation: Kiruna - a town on the move. *European Urban and Regional Studies*, *17*(4), 433-442.

Nixon, R. (2011). *Slow violence and the environmentalism of the poor.* Harvard University Press.

Oulu, M. (2016). Core tenets of the theory of ecologically unequal exchange. *Journal of Political Ecology*, *23*(1), 446-466.

Pavel, C. y E. Tzimas. (2016). *Raw materials in the European defense industry*. European Commission, dg Joint Research Centre.

Peluso, N. (1993). Coercing conservation: the politics of state resource control. *Global Environmental Change*, *3*(2), 199-218.

Pijpers, R. y T. H. Eriksen. (2019). *Mining encounters: extractive industries in an overheated world*. Pluto Press.

Prados, M. J. (2008). *Naturbanization: new identities and processes for rural-natural areas*. crc Press.

Ramonet, I. (2020). La pandemia y el sistema-mundo. *Le Monde Diplomatique en español*. https://mondiplo.com/la-pandemia-y-el-sistema-mundo

Saleth, L. A. e I. Varov. (2023). Anticipating lithium extraction in northern Portugal: a sacrifice zone in the making? *Journal of Political Ecology*, *30*(1), 594-615.

Sandlots, J. y Keeling, A. (2016). "Toxic legacies, slow violence, and environmental injustice at Giant Mine, Northwest Territories". The Northern Review 42, 7-21.

Santamarina, B. y J. Bodí. (2013). Rural places versus naturalized spaces. The logic of knowledge and acknowledgement in protected heritage areas. *aibr. Revista de Antropología Iberoamericana*, *8*(1), 111-138.

Smith, J.M. Y Kirsch, S. (2018). Anthropology of mining. En H. Callaran (Ed.) The international Encyclopedia of Anthropology. Wilde-Blackwell.

Schwab, K. (2015). The fourth industrial revolution: what it means and how to respond. https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

Scott, D. N. y A. A. Smith. (2017). "Sacrifice zones" in the green energy economy: toward an environmental justice framework. *McGill Law Journal / Revue de droit de McGill*, *62*(3), 861-898.

Silva, E., M. Akchurin y A. Bebbington. (2018). Policy effects of resistance against mega-projects in Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, *106*, 25-46.

Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation. *Energy Research & Social Science*, *73*, artículo 101916.

Stacul, J. (2003). *The bounded field. Localism and local identity in an Italian Alpine valley*. Berghan Books.

Stiernström, A. (2023). Sustainable development and sacrifice in the rural North. *Sociologia ruralis*, *63*(3), 661-682.

Studnicki-Gizbert, D. (2016). Canadian mining in Latin America (1990 to present): a provisional history. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, *41*(1), 95-113.

Suopajärvi, L., G. Poelzer, T. Ejdemo, E. Klyuchnikova, E. Korchak y V. Nygaard. (2016). Social sustainability in northern mining communities: a study of the European North and Northwest Russia. *Resources Policy*, *47*, 61-68.

Tsing, A. (2005). *Friction: an ethnography of global connection*. Princeton University Press.

Unctad (United Nations Conference on Trade and Development). (2015). *World commodity trends and prospects. Report of the Secretary-General. A/70/184*.

Vaccaro, I. y O. Beltrán (eds.). (2010). *Social and ecological history of the Pyrenees: state, market, and landscape*. Left Coast Press.

Vaccaro, I. y O. Beltrán. (2014). *Parcs als comunals: la patrimonialització de la muntanya al Pallars Sobirà*. Generalitat de Catalunya.

Vaccaro, I., Harper, K. y S. Murray (eds.). (2016). *Anthropologies of post-industrialism: ethnographies of disconnection*. Routledge.

Vaccaro, I., E. Kirsch e I. Sabaté. (2019). The emergence of the global debt society: governmentality and profit extraction through fabricated abundance and imposed scarcity. *Journal of Global and Historical Anthropology*, *85*,1-15.

Van der Ploeg, J, J. Franco y S. Borras. (2015). Land concentration and land grabbing in Europe: a preliminary analysis. *Canadian Journal of Development Studies*, *36*(2), 147-162.

Vandergeest, P. y N. Peluso. (2009). Territorialization and state power in Thailand. *Theory and Society*, *24*, 385-426.

Vázquez Ruiz, A. (2020). Op-ed: the end of naïve Europe, the rise of green imperialism. *Commodity Frontiers*, *1*, 56-59. doi: 10.18174/cf.2020a17975

Velicu, I. (2019). De-growing environmental justice: reflections from anti-mining movements in Eastern Europe. *Ecological Economics*, *159*, 271-278.

Velicu, I. y M. Kaika. (2017). Undoing environmental justice: re-imagining equality in the Rosia Montana anti-mining movement. *Geoforum*, *84*, 305-315.

Vesalon, L. y R. Cretan. (2015). "We are not the Wild West": anti-fracking protests in Romania. *Environmental Politics*, *24*(2), 288-307.

Wagner, H. y G. Fettweis. (2001). About science and technology in the field of mining in the Western world at the beginning of the new century. *Resource Policy*, *27*, 157-168.

Willow, A. J. y S. Wylie. (2014). Politics, ecology, and the new anthropology of energy: exploring the emerging frontiers of hydraulic fracking. *Journal of Political Ecology*, *21*(1), 222-236.

Wilson, G. (2001). From productivism to post-productivism... and back again? Exploring the (un)changed natural and mental landscapes of European agriculture. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *26*(1), 77-102.

Wilson, G. (2007). *Multifunctional agriculture: a transition theory perspective*. Cromwell Press.

Woods, M. (2011). *Rural*. Routledge.

Woods, M. (2012). Editorial: New directions in rural studies. *Journal of Rural Studies*, *28*, 1-4.

Woods, M. y J. McDonagh. 2011. Rural Europe and the world: globalization and rural development. *European Countryside*, *3*, 153-163.

Ye, J., J. Van der Ploeg, S. Schneider y T. Shanin. (2020). The incursions of extractivism: moving from dispersed places to global capitalism. *Journal of Peasant Studies*, 47(1), 155-183.

SECCIÓN F4.
NUEVOS TEMAS (AGUA, ANTROPOCENO, SOBERANIA ALIMENTARIA, CAMBIO CLIMATICO)

41. Agua neoliberal vs agua posneoliberal: geografías de privatización y resistencia [1]

Karen Bakker

Resumen: Este artículo documenta el proceso cada vez más variado de privatización del suministro urbano de agua desde la década de los noventa. El análisis evita las amplias generalizaciones del posneoliberalismo, con frecuencia asociadas a supuestas alternativas al suministro privado de agua. El crecimiento continuo de la actividad del sector privado, combinado con la retirada estratégica de las empresas privadas de ciertos países y regiones, debe interpretarse como una intensificación parcial de la neoliberalización, y no como una clara regresión de esta. El artículo concluye con una reflexión sobre la relevancia de los hallazgos para debates más amplios sobre la neoliberalización y el posneoliberalismo.

Palabras clave: desarrollo, gobernanza ambiental, neoliberalización, resistencia, agua.

La propiedad privada y la gestión de los recursos y servicios ambientales es uno de los temas más controvertidos de la gobernanza ambiental contemporánea. Los geógrafos han contribuido de forma significativa a este debate por medio de un conjunto cada vez más amplio de estudios sobre la naturaleza neoliberal (para colecciones editadas, cf. Heynen *et al.*, 2007; Mansfield, 2008). Este artículo aborda dichos debates mediante un análisis de la participación del sector privado en la gestión del suministro de agua, centrándose en el papel de las empresas privadas en el manejo del suministro urbano de agua en países en desarrollo.

---

1 Publicado originalmente en: Karen Bakker, 2013, "Neoliberal versus postneoliberal water: geographies of privatization and resistance", *Annals of the Association of American Geographers*, 103(2): 253-260.

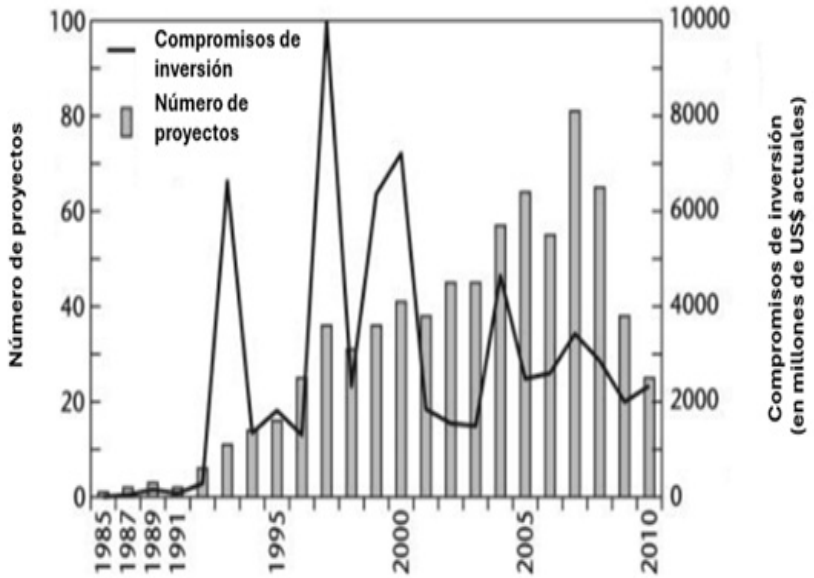
El análisis comienza con una breve descripción del rápido aumento (y el retiro parcial) de la participación del sector privado en el suministro de agua durante las dos últimas décadas, en el contexto más amplio de la neoliberalización de la regulación del agua y el financiamiento de la infraestructura. Después, se analizan las dimensiones espaciales de las estrategias emprendidas por las empresas privadas. La siguiente sección resume de forma breve algunos de los aspectos más importantes de las protestas contra la privatización, revisa rápidamente las implicaciones de la resistencia a la privatización y considera alternativas a la privatización a la luz de los debates sobre el posneoliberalismo. El artículo concluye con una discusión sobre las ideas relevantes para debates más generales en torno a la neoliberalización y el posneoliberalismo.

El auge y (parcial) retiro del sector privado

A principios de los años ochenta, era poco frecuente la gestión privada de los sistemas de abastecimiento de agua. La participación del sector privado aumentó de manera significativa en la década de los noventa (Figura 1).[2] y se concentró en las ciudades (lo que no sorprende, dadas las economías de escala asociadas a las densas redes urbanas). En la actualidad, se calcula que hasta 10% de la población mundial (en su mayoría urbana) se abastece por parte de empresas privadas, aunque esta cifra es discutible, sobre todo por la complejidad de evaluar la magnitud total de la actividad privada informal a pequeña escala, además de los proveedores privados corporativos a gran escala (Hall y Lobina, 2006b; Pinsent Masons, 2012).

2 Lo contenido en la base de datos de participación privada en infraestructura del Banco Mundial representa los pronósticos de inversión e incluye todo el financiamiento para cualquier proyecto con participación del sector privado. Cf. ppi.worldbank.org/resources/ppi methodology.aspx

Figura 1. El involucramiento del sector privado en el suministro del agua, número de proyectos e inversión total (1984-2010).



Fuente: Banco Mundial, base de datos de Participación Privada del Banco Mundial.

Los promotores de la privatización del agua en los países en vías de desarrollo deben entenderse dentro del contexto más amplio de la liberalización de la industria del agua en Europa durante la década de los noventa (y en Gran Bretaña en 1989), lo que permitió a las empresas de agua francesas, británicas y españolas diversificar sus actividades en el plano internacional (Allouche y Finger, 2001; Bakker, 2004). La liberalización del sector del agua en el Sur global, apoyada por políticas a favor del sector privado, la asistencia técnica y programas de capacitación de agencias de préstamo bilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, facilitó esto (Banco Mundial, 1997; Banerjee*et al*., 2006; Goldman, 2007). De hecho, las reformas de emprendimientos públicos relativas a la privatización (por ejemplo, reformas legales) fueron un componente

significativo de los ajustes estructurales de la condicionalidad de préstamos en el sector del agua a inicios de los noventa (Banco Mundial, 2002; Conca, 2006; WDM, 2006). Para mediados de la década, muchos países en desarrollo habían emprendido al menos un proyecto de privatización, a menudo en una ciudad más grande (por lo regular la capital) (Bakker, 2010).

Los partidarios de la privatización recurrieron, como la justificación fundamental de su causa, a la necesidad de abastecer de agua a los pobres, mil millones de los cuales no tienen acceso a un suministro suficiente y seguro. Muchos de ellos también señalaron que los llamados sistemas públicos de abastecimiento de agua solían limitarse a los barrios urbanos de clase media y acomodada, donde los clientes recibían cantidades de agua mucho mayores —y a menudo a precios más bajos por unidad de volumen— que en los barrios pobres. De hecho, muchos de los clientes más ricos se beneficiaban de los subsidios para estas redes de suministro de agua, cuya distribución irregular por el paisaje urbano (mejor caracterizada como un "archipiélago" que como una red) provocaba la exclusión sistemática de muchos residentes urbanos (Bakker, 2010). Al afirmar la existencia de un "fracaso estatal" generalizado de los servicios públicos, muchos expertos empezaron a plantear que en los años noventa los pobres ya se veían obligados a tratar el agua como un bien comercial al recurrir a proveedores privados (a menudo informales y no regulados) para disfrutar de ella.

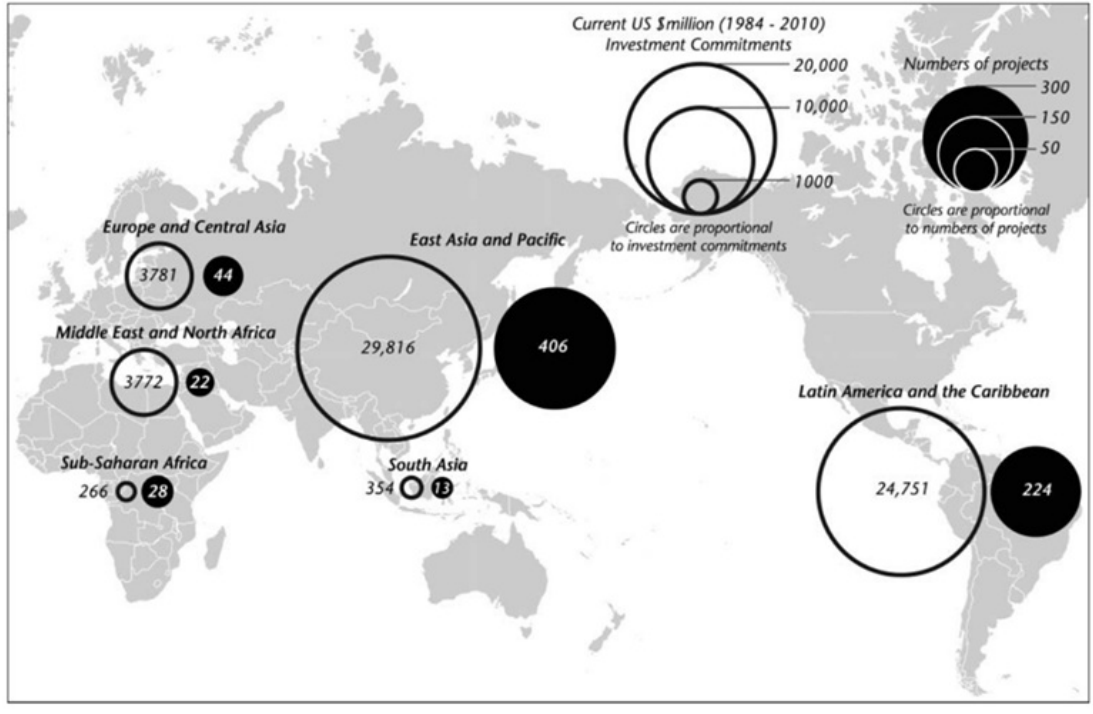
Hubo varias interpretaciones para esta situación: los que apoyaban la participación del Estado reclamaban una mayor intervención gubernamental (por ejemplo, Swyngedouw, 2004; 2006; PNUD, 2006), mientras que los partidarios de la participación privada adoptaron un punto de vista diferente, argumentando que los pobres se beneficiarían de tarifas más bajas y de un mejor acceso al agua si las empresas privadas gestionaran las redes estatales.[3] Este argumento se basaba en la comprensión del agua como un bien económico —formulada en los Principios de Dublín de 1992— y en el supuesto de que las empresas privadas permitirían grandes flujos de financiamiento privado y mejorarían la eficiencia (aportando conocimientos

3 Esto sucedió en alianza con la promoción de mercados del agua para agua "en bruto" para campesinos e irrigadores, más notablemente en Chile (Cf. Bauer, 1998; Budds, 2004).

técnicos de los que carecía el sector público), por lo que la red podría ampliarse a precios asequibles para todos los clientes.

A partir de estos argumentos, las primeras previsiones sobre la participación del sector privado en el suministro de agua eran optimistas. Sin embargo, para finales de los noventa, había disminuído la actividad del sector privado, debido en parte a una serie de crisis financieras y al estallido de la burbuja de la alta tecnología, que afectaron los flujos de inversión extranjera directa. La inversión se recuperó en algunos sectores, pero no en el abastecimiento de agua, donde la inversión se redujo de forma considerable a partir de 2000 (Figura 1). Ha sido mínima la inversión en el África subsahariana y en zonas rurales —donde son mayores las necesidades de desarrollar servicios para el abastecimiento de agua—, pues los proyectos de participación del sector privado se han concentrado casi exclusivamente en las grandes zonas urbanas de los países de renta media (wdm, 2006; Marin, 2009; Figura 2). Si se excluye a China (donde la inversión se ha mantenido), el descenso es aún más evidente (Figura 3).

Figura 2. El involucramiento del sector privado en el suministro del agua, por región (1984-2010).



Fuente: base de datos de participación privada del Banco Mundial. De izquierda a derecha, arriba abajo: Europa y Asia Central, Oriente Medio y África del Norte, África subsahariana; Asia del Este y Pacífico. Compromisos de inversión en millones de dólares en la moneda actual (1984-2010), Los círculos son proporcionales a los compromisos de inversión. Número de proyectos, los círculos son proporcionales al número de proyectos, América Latina y el Caribe.

Figura. 3. El involucramiento del sector privado en el suministro del agua, China comparada con el resto del mundo (1985-2010).



Fuente: base de datos de participación privada del Banco Mundial.

¿Por qué no se materializaron los flujos financieros esperados por los seguidores de la privatización? En primer lugar, las empresas privadas se dieron cuenta de que el suministro de agua exige mayor inversión de capital, pero tiene menores tasas de recuperación que otros sectores de servicios públicos de red (PricewaterhouseCoopers, 2003; Izaguirre, 2005). Un segundo factor fue el mayor riesgo económico; aunque atraídas por los ingresos estables a largo plazo que proporcionan los monopolios de suministro de agua, los largos periodos de amortización que requieren los activos de larga

duración y gran intensidad de capital (que tienen pocos o ningún uso alternativo) exponen a las empresas a riesgos relacionados con la renegociación de contratos, los niveles de las tarifas y las fluctuaciones monetarias. Un tercer problema es la dificultad de ampliar simultáneamente la red (lo que requiere, al menos en teoría, una tarifa de recuperación), dada la elevada proporción de clientes pobres con escasa capacidad de pago. Los riesgos políticos (por ejemplo, los generados por protestas públicas de gran relevancia) fueron un cuarto problema; por ejemplo, la Guerra del Agua de Cochabamba (Bustamente *et al*., 2005; Perreault, 2006) provocó dudas muchos inversionistas, en especial cuando se produjo una oleada de cancelaciones de contratos desde Buenos Aires hasta Yakarta y Manila. Como consecuencia de estos riesgos, a partir de mediados de los noventa, las empresas, cada vez más cautelosas, limitaron su participación a contratos de menor riesgo, con requisitos de inversión menores o nulos.[4] El suministro de agua atrajo la menor inversión de todos los sectores de servicios públicos en red (Kerf e Izaguirre, 2007).

A medida que se reducían las inversiones del sector privado, disminuían los flujos de ayuda al sector hídrico (en parte debido a las expectativas de que la financiación privada sustituiría a la pública (wwc, 2005; Kaul y Conceição, 2006; pnud, 2006). Sin embargo, en 2005 quedó claro que la fuerte reducción en el financiamiento para la ayuda no estaba siendo sustituida por inversiones reales de empresas privadas (wdm, 2005; 2006; Hall y Lobina, 2006a). El personal del Banco Mundial concluyó que "muchos de los ajustes en el financiamiento público y la oda (*overseas development assistance*) reflejan, en gran medida, que las expectativas de participación del sector privado en el financiamiento de las necesidades de infraestructura eran demasiado optimistas" (Briceno-Garmendia *et al*., 2004: 20).

Además, la ampliación de la cobertura a hogares pobres resultó ser uno de los aspectos más decepcionantes de la actuación del sector privado. A pesar de las promesas que se hicieron al respecto, la mayor parte del financiamiento del sector del agua para nuevas tomas (conexión de hogares pobres) ha venido del financiamiento público y de los ingresos por tarifas (de explotación)

4 Por ejemplo, contratos construir-operar-transferir, en vez de contratos de administración o concesión.

(Winpenny, 2003; Balance y Tremolet, 2005). Ante la ausencia de tarifas que recuperen la totalidad de los costos —que rara vez se aplicaron, a pesar de las recomendaciones de los promotores de la privatización—, era difícil que se establecieran un gran número de nuevas conexiones (Budds y McGranahan, 2003; Annez, 2006; Prasad, 2006; Marin, 2009). Como consecuencia, a mediados de la década de 2000 empezó a cuestionarse la capacidad del sector privado para cumplir las expectativas de suministro de agua "en favor de los pobres". Los críticos sostenían que el sector privado no había logrado superar de forma sistemática al sector público en cuanto a nuevas conexiones y nuevos financiamientos —algunas de las ventajas identificadas con frecuencia por los defensores de la privatización del suministro de agua— (Davis, 2005; Prasad, 2006; Castro, 2008; Bakker, 2010).

En un brusco cambio de rumbo, el Banco Mundial reconoció en 2005 que la gran mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua seguirán siendo de propiedad pública. El Banco argumentó que era necesario un nuevo esfuerzo del sector público para ampliar la prestación de servicios urbanos de abastecimiento de agua a los hogares pobres (Cf. Banco Mundial / fmi, 2003; Banco Mundial, 2005). No obstante, al mismo tiempo, el número de clientes atendidos por el sector privado siguió aumentando (hasta alcanzar 13% de la población mundial), y el número de empresas privadas que operan en el sector pasó de una docena a mediados de la década de los noventa a más de 150 en 2012 (Pinsent Masons, 2012). Las empresas privadas siguieron concentrando su actividad en países de renta media y en sus ciudades de renta alta, lo que sugiere un aumento en la variación espacial de la inversión privada en el suministro de agua. Así pues, la aparente retirada del sector privado puede entenderse mejor como una mutación de la neoliberalización, donde la concentración espacial expresa el perfeccionamiento de las oportunidades de lucro.

Resistir a la privatización: ¿agua posneoliberal?

Una de las principales preocupaciones de los defensores de la privatización era el riesgo político provocado por las protestas generalizadas que, a finales de la década de los noventa, se habían convertido en un fenómeno mundial. Incluso el Banco Mundial reconoció que "el resultado frecuente

(no inevitable) [de la privatización del agua] eran protestas populares, Gobiernos insatisfechos e inversionistas descontentos" (Banco Mundial, 2005: 22). Estas protestas eran (y son) diversas: grupos ecologistas, de mujeres, de lucha contra la pobreza y grupos religiosos que colaboran con los sindicatos en alianzas multisitio y multiescala, a menudo articuladas con luchas altermundistas (en particular, las que exigen la reforma de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, y los acuerdos y organizaciones comerciales, como el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles [gatt, siglas en inglés] y la Organización Mundial del Comercio [omc]) (Laurie y Marvin, 1999; Brecher *et al*., 2000; Petrella, 2001; Shiva, 2002; Assies, 2003; Barlow y Clarke, 2003; Hukka y Katko, 2003; Hall *et al*., 2005; McDonald y Ruiters, 2005; Swyngedouw, 2005; Barrett y Jaichand, 2007; Bond y Dugard, 2008; Harris, 2009).

Para muchos activistas, la privatización del agua implica la "acumulación por desposesión": la apropiación, con fines de lucro, por parte del sector privado tanto de los "bienes comunes" naturales como de los bienes públicos creados y fuertemente subsidiados por el Estado (Harvey, 2003; Glassman, 2006; Ahlers, 2010; McDonald y Ruiters, 2012). Con frecuencia, las preocupaciones ambientales y de justicia social están vinculadas a estas campañas (por ejemplo, mediante la concepción del agua como un bien común o en términos de derechos indígenas sobre el agua). Los activistas sostienen que el agua es cualitativamente diferente: un recurso de hecho insustituible, esencial para la vida y la salud pública e imbuido de un significado político y espiritual.

¿Qué tan exitosas han sido las campañas contra la privatización? Los activistas destacan el alto índice de cancelaciones de contratos en el sector del agua (el más relevante de todos los sectores de infraestructura) (Hall *et all*., 2005); sin embargo, es importante reconocer que no todas estas cancelaciones se produjeron solo a partir de las campañas antiprivatización (Bakker, 2010). A menudo fueron iniciadas por las propias empresas privadas, incitadas por la obtención de menos beneficios de lo esperado o por dificultades para acceder al capital financiero prometido. No obstante, el riesgo político creado por estas campañas sin duda influyó en muchas rescisiones de contratos, pues la resistencia local aumentó las dudas sobre

la recuperación real (o prevista) de los costos, lo que desestabilizó las expectativas de rentabilidad que constituían la base de los contratos privados. ¿Hasta qué punto estas campañas han creado modos "posneoliberales" de suministro de agua? Las campañas antiprivatización (especialmente activas en el Sur global) han promovido una serie de "alternativas" a la privatización, entre las que se incluyen las asociaciones público-públicas, la remunicipalización y las campañas a favor de reformas constitucionales y legales relativas al derecho humano al agua, que ya existen en más de cien países (Smets, 2006; wdm, 2007; Gialis *et al*., 2009; Gupta *et al*., 2010; Sultana y Loftus, 2011; McDonald y Ruiters, 2012; Pigeon *et al*., 2012; Valdovinos, 2012). También se han producido reformas de la legislación sobre el agua para limitar o prohibir la privatización (Conca, 2006; Bakker, 2010).

Estas alternativas tienen un significado simbólico y práctico; sin embargo, en algunos casos también pueden ser ambiguas al ser compatibles con la neoliberalización. Tomemos, por ejemplo, el caso de los "derechos de agua" colectivos (promovidos en la región andina como alternativa a la propiedad privada): estos corren el riesgo de crear formas privadas y excluyentes de gobernanza de los recursos mediante el establecimiento de derechos de agua "duros", que incluyen algunos usos consuetudinarios y excluyen otros, como los usos periurbanos del agua (Boelens *et al*., 2010; Bustamante *et al*., 2012). Asimismo, las asociaciones público-privadas comunitarias promovidas por algunos donantes podrían ser congruentes con la neoliberalización, ya que corren el riesgo de afianzar normas dobles o múltiples de suministro de agua en las comunidades más pobres, mientras que las comunidades más ricas siguen recibiendo servicios de mayor calidad (ya sea de proveedores públicos o privados).

¿Cuáles son las implicaciones de este análisis para nuestra comprensión de la neoliberalización y del posneoliberalismo? En primer lugar, estamos asistiendo a un perfeccionamiento, más que a una reducción, del proyecto neoliberal. En el caso del agua (como en muchos otros), esto tiene una dimensión espacial, ya que las empresas privadas intensifican la "selección" de los barrios, ciudades y países más rentables en los que operar. En otras palabras, la "retirada" del sector privado ha dejado las actividades de suministro de

agua menos rentables en manos del Estado (o de las comunidades), mientras que ha retenido las actividades más provechosas.

Esto sugiere, a su vez, que el concepto de diversificación adquiere una importancia aún mayor en los análisis del neoliberalismo: La diferenciación espacial de la actividad privada se convierte en una estrategia central para mantener los beneficios y, por tanto, es clave en la acumulación de capital. De hecho, se pueden anticipar un incremento de la diversificación —en lugar de cierta reducción hacía una media neoliberal (global)— con las tecnologías, las estrategias espaciales, el "control" excluyente de grupos de clientes cada vez más diferenciados y la búsqueda de nuevos nichos lucrativos dentro del sector (por ejemplo, la mercantilización de las aguas residuales para usos rurales) (Scott y Raschid-Sally, 2012). Otro ejemplo es el de los promotores de proveedores independientes a pequeña escala —los arquetípicos vendedores ambulantes de agua, autónomos e informales, que se ven en las calles de muchas grandes ciudades de países en desarrollo— como solución provisional a la crisis del agua urbana (Van Dijk, 2008).

En segundo lugar, no debemos considerar las posibles alternativas a la privatización necesariamente como posneoliberales, pues pueden ser un caso de neoliberalización que da lugar a otros, o un medio por el que los Estados delegan la responsabilidad de los servicios en determinadas clases o grupos de ciudadanos. Esto es particularmente relevante si tomamos en cuenta que los subsidios transversales en el sector del agua solían tener, en algunos casos, un componente de compensación espacial que a menudo se elimina con la gobernanza neoliberal del agua. Por tanto, las "alternativas" a la privatización del agua deberían observarse en algunos casos como contrapartidas de los procesos de neoliberalización, e incluso constitutivas de estos (Peck *et al*., 2010). No se trata, por supuesto, de negar las luchas y los éxitos reales de los movimientos contra la privatización, sino más bien proceder con cautela en los debates sobre la resistencia a la neoliberalización.

Tomemos, por ejemplo, el caso del derecho humano al agua en el derecho internacional, foco de la mayor campaña internacional impulsada por activistas antiprivatización (Sultana y Loftus, 2011). Aunque ha sido un éxito

táctico (en particular, la declaración de 2010 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (onu) que afirma la existencia de un derecho al agua), esta estrategia se ve limitada por el hecho de que los derechos humanos están arraigados en una tradición liberal que da prioridad a la propiedad privada y a los derechos individuales (Bakker, 2007). Como ha reiterado el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua, el actual régimen internacional de derechos humanos es compatible en su totalidad con los derechos de propiedad privada y la gestión privada, ya sea del agua o de otras necesidades básicas (De Albuquerque, 2010). El uso del concepto de derecho humano al agua por parte de los activistas antiprivatización podría ser, por tanto, una táctica equivocada (Bakker, 2007). Así pues, se plantean las siguientes preguntas: ¿es la ausencia de suministro privado una condición suficiente para el suministro posneoliberal de agua o, más bien, es necesaria la resistencia a la mercantilización (que puede coexistir, en determinadas formas, con el suministro estatal)? En este último caso, ¿qué tipo de estrategias de resistencia podrían desplegarse?

En tercer lugar, no debemos interpretar de forma equivocada el poder relativo del Estado frente al capital en la coyuntura actual. La renovada participación del Estado es, en muchos casos, necesaria por el repliegue de las empresas privadas, pero esto no implica que los proveedores gubernamentales están necesariamente bien equipados para la tarea. Las reformas a la gobernanza (por ejemplo, la descentralización) se han intensificado en la última década. Al mismo tiempo, la rentabilidad sostenida del sector privado depende cada vez más del apoyo del sector público, sobre todo por medio de marcos normativos y del financiamiento. Dados los elevados riesgos y la ausencia en muchos casos de una sólida regulación, algunos consideran que el apoyo activo de los acreedores y los donantes bilaterales (por ejemplo, mediante garantías parciales de riesgo) es una condición previa necesaria para la participación del sector privado en los países de renta baja y media, por lo regular vía el financiamiento de proyectos y garantías de riesgo. En consecuencia, el control público puede ser ilusorio, sobre todo cuando se pide al sector público que garantice al sector privado (por ejemplo, utilizando la Ayuda Oficial para el Desarrollo a fin de facilitar proyectos petroleros o pidiendo a los Gobiernos que ofrezcan garantías globales de riesgo político a

las empresas privadas) (Winpenny, 2003). En otras palabras, es posible que los Gobiernos deban continuar ayudando de manera activa al sector privado en algunas áreas, lo que plantea la cuestión de qué ocurre con aquellas áreas donde el sector privado decide no operar y los Gobiernos no pueden o no quieren actuar, un punto en particular relevante en el caso del agua, dado que las economías de escala suelen restringir las operaciones privadas a las ciudades más grandes. Cualquier análisis de las supuestas transiciones al posneoliberalismo debería tener en cuenta estos puntos.

Conclusiones

En las dos últimas décadas se ha intensificado el patrón espacialmente diversificado de la inversión del sector privado en el suministro de agua, lo que sugiere que el papel de las empresas privadas en el suministro de "agua para todos" (el mantra del desarrollo) en los países en desarrollo ha sido —y seguirá siendo— relativamente limitado, sobre todo en lo que respecta a los consumidores de bajos ingresos. Tras una oleada inicial de actividad en todo el mundo, las empresas privadas se han retirado de modo selectivo de algunas zonas para centrarse en regiones, países, ciudades e incluso barrios más rentables y de menor riesgo. La intensificación de las inversiones en China, por ejemplo, contrasta con la eliminación casi total de nuevos contratos de concesión en el África subsahariana, y la creciente atención a las zonas urbanas ha ido en detrimento de las zonas periurbanas y rurales. Al mismo tiempo, observamos la aparición de una serie de alternativas a la privatización, que incluyen iniciativas de suministro de agua tanto públicas como comunitarias.

Sin embargo, debemos ser cautos a la hora de utilizar el término *posneoliberal* para caracterizar estas alternativas. En este artículo se argumenta que estas estrategias y pautas, sobre todo cuando involucran una variación espacial, podrían implicar una intensificación de la neoliberalización (en lugar de una tendencia posneoliberal) (Brenner *et al*., 2010). En otras palabras, aunque sus formas, procesos y patrones espaciales están cambiando de forma rápida, en la mayor parte del mundo seguimos lidiando con los paisajes desiguales de la gobernanza del agua producidos por el agua

neoliberal. En este contexto, este artículo lanza una advertencia: cuando exploremos alternativas a la privatización (e imaginemos futuros posneoliberales), debemos reconocer que continúan —y evitar aprobar— patrones de acceso cada vez más desiguales arraigados en el neoliberalismo.

Referencias

Ahlers, R. (2010). Fixing and nixing: the politics of water privatization. *Review of Radical Political Economics*, *42*(2), 213-230.

Albuquerque, C. de. (2010). *Report of the independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation.* Office of the Independent Expert on Safe Drinking Water and Sanitation.

Allouche, J. y M. Finger. (2001). *Water privatization: transnational corporations and the re-regulation of the water industry.* Taylor & Francis.

Annez, P. (2006). *Urban infrastructure finance from private operators: what have we learned from recent experience?* World Bank Policy Research Working Paper 4045, World Bank.

Assies, W. (2003). David versus Goliath in Cochabamba: water rights, neoliberalism, and the revival of social protest in Bolivia. *Latin American Perspectives*, *30*(3), 14-36.

Bakker, K. (2004). *An uncooperative commodity: privatizing water in England and Wales.* Oxford University Press.

Bakker, K. (2007). The commons versus the commodity: "Alter"-globalization, privatization, and the human right to water in the global South. *Antipode*, *39*(3), 430-455.

Bakker, K. (2010). *Privatizing water: governance failure and the world's urban water crisis*. Cornell University Press.

Balance, T. y S. Tremolet. (2005). *Private sector participation in urban water supply in sub-Saharan Africa*. German Development Cooperation.

Banco Mundial. (1997). *Toolkits for private participation in water and sanitation*.

Banco Mundial. (2002). *Private sector development strategy: directions for the World Bank Group*.

Banco Mundial. (2005). *Infrastructure development: the roles of the public and private sectors: World Bank Group's approach to supporting investments in infrastructure*.

Banco Mundial / fmi. (2003). *Implementing the World Bank Group infrastructure action plan*.

Banerjee, S., J. Oetzel y R. Ranganathan. (2006). Private provision of infrastructure in emerging markets: do institutions matter? *Development Policy Review*, *24*(2), 175-202.

Barlow, M. y T. Clarke. (2003). *Blue gold: the fight to stop the corporate theft of the world's water*. Stoddart.

Barrett, D. y V. Jaichand. (2007). The right to water, privatized water and access to justice: tackling United Kingdom water companies' practices in developing countries. *South African Journal of Human Rights*, *23*(3), 543-562.

Bauer, C. (1998). *Against the current: privatization, water markets, and the state in Chile*. Kluwer.

Boelens, R., D. Getches y A. Guevara-Gil. (2010). *Out of the mainstream: water rights, politics, and identity*. Earthscan.

Bond, P. y J. Dugard. (2008). Water, human rights and social conflict: South African experiences. *Law, Social Justice & Global Development*, *1*, 1-21.

Brecher, T., T. Costello y B. Smith. (2000). *Globalization from below: the power of solidarity* (2.a ed.). South End Press.

Brenner, N., J. Peck y N. Theodore. (2010). Variegated neoliberalization: geographies, modalities, pathways. *Global Networks*, *10*(2), 1-41.

Briceno-Garmendia, C., A. Estache y N. Shafik. (2004). *Infrastructure services in developing countries: access, quality, costs, and policy reform*. World Bank Policy Research Paper 3468, World Bank.

Budds, J. (2004). Power, nature and neoliberalism: the political ecology of water in Chile. *Singapore Journal of Tropical Geography*, *25*(3), 322-342.

Budds, J. y G. McGranahan. (2003). Are the debates on water privatization missing the point? Experiences from Africa, Asia and Latin America. *Environment and Urbanization*, *15*(2), 87-114.

Bustamante, R., D. Crespo y A. Walnycki. (2012). Seeing through the concept of water as a human right in Bolivia. En F. Sultana y A. Loftus (eds.), *The right to water: politics, governance and social struggles* (pp. 223-240). Taylor & Francis.

Bustamente, R., E. Peredo y M. Udaeta. (2005). Women in the "water war" in the Cochabamba Valleys. En V. Bennet, S. Dávila-Poblete y M. Nieves (eds.), *Opposing currents: the politics of water and gender in Latin America* (pp. 72-90). University of Pittsburgh Press.

Castro, J. E. (2008). Neoliberal water and sanitation policies as a failed development strategy: lessons from developing countries. *Progress in Development Studies*, *8*(1), 63-83.

Conca, K. (2006). *Governing water: contentious transnational politics and global institution building*. mit Press.

Davis, J. (2005). Private sector participation in the water and sanitation sector. *Annual Review of Environment and Resources*, *30*, 145-183.

Gialis, S., A. Loukas y N. Mylopoulos. (2009). The unequal geographical expansion of water privatization: global and European perspectives. *Water Utility Management International*, *4*(3), 17-23.

Glassman, J. (2006). Primitive accumulation, accumulation by dispossession, accumulation by "extra-economic" means. *Progress in Human Geography*, *30*(5), 608-625.

Goldman, M. (2007). How "water for all!" policy became hegemonic: the power of the World Bank and its transnational policy networks. *Geoforum*, *38*(5), 786-800.

Gupta, J., R. Ahlers y L. Ahmed. (2010). The human right to water: moving towards consensus in a fragmented world. *Review of European Community and International Law*, *19*(3), 294-305.

Hall, D. y E. Lobina. (2006a). *Pipe dreams*. World Development Movement / Psiru.

Hall, D., y E. Lobina. (2006b). *Water as a public service*. Public Services International Research Unit, University of Greenwich.

Hall, D., E. Lobina y R. de la Motte. (2005). Public resistance to privatization in water and energy. *Development in Practice*, *15*(3-4), 286-301.

Harris, L. (2009). Gender and emergent water governance: comparative overview of neoliberalized natures and gender dimensions of privatization, devolution and marketization. *Gender, Place & Culture*, *16*(4), 387-408.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.

Heynen, N., J. McCarthy, W. S. Prudham y P. Robbins. (2007). *Neoliberal environments: false promises and unnatural consequences*. Routledge.

Hukka, J. J. y T. S. Katko. (2003). Refuting the paradigm of water services privatization. *Natural Resource Forum*, *27*(2), 142-155.

Izaguirre, K. (2005). *Private infrastructure: emerging market sponsors dominate private flows*. World Bank.

Kaul, I., y P. Conceição. (2006). *The new public finance: responding to global challenges.* Oxford University Press.

Kerf, M., y A. Izaguirre. (2007). *Revival of private participation in developing country infrastructure: a look at recent trends and policy implications*. World Bank.

Laurie, N. y S. Marvin. (1999). Globalization, neoliberalism and negotiated development in the Andes: water projects and regional identity in Cochabamba. *Environment and Planning A*, *31*(8), 1401-1415.

Mansfield, B. (ed.). (2008). *Privatization: property and the remaking of nature–society relations*. Blackwell.

Marin, P. (2009). *Public-private partnerships for urban water utilities: a review of experiences in developing countries*. World Bank.

McDonald, D. y G. Ruiters. (2005). *The age of commodity: water privatization in Southern Africa*. Earthscan.

McDonald, D. y G. Ruiters. (2012). *Alternatives to privatization: public options for essential services in the global South.* Routledge.

Peck, J., N. Theodore y N. Brenner. (2010). Post neoliberalism and its malcontents. *Antipode*, *41*(6), 1236-1258.

Perreault, T. (2006). From the Guerra del Agua to the Guerra del Gas: resource governance, neoliberalism and popular protest in Bolivia. *Antipode*, *38*(1), 150-172

Petrella, R. (2001). *The water manifesto: arguments for a world water contract.* Zed Books.

Pigeon, M., D. McDonald, O. Hoedeman y S. Kishimoto. (2012). *Remunicipalisation: Putting water back in public hands.* Transnational Institute.

Pinsent Masons. (2012). *Water yearbook*.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). (2006). *United Nations human development report 2006: Beyond scarcity: power, poverty, and the global water crisis*.

Prasad, N. (2006). Privatization results: private sector participation in water services after 15 years. *Development Policy Review*, *24*(6), 669-692.

PricewaterhouseCoopers. (2003). *Comparative review of ifi risk mitigation instruments and direct sub-sovereign lending.* Pricewaterhouse-Coopers / World Bank.

Scott, C. y L. Raschid-Sally. (2012). The global commodification of wastewater. *Water International*, *37*(2), 147-155.

Shiva, V. (2002). *Water wars: privatization, pollution and profit*. Pluto.

Smets, H. (2006). *The right to water in national legislation*. Agence Franc¸aise de Developpement.

Sultana, F. y A. Loftus. (2011). *The right to water: politics, governance and social struggles*. Taylor & Francis.

Swyngedouw, E. (2004). *Social power and the urbanization of water—Flows of power*. Oxford University Press.

Swyngedouw, E. (2005). Dispossessing H2O: the contested terrain of water privatization. *Capitalism, Nature, Socialism*, *16*(1), 81-98.

Swyngedouw, E. (2006). *Power, water and money: exploring the nexus*. United Nations Development Programme Human Development Report Office. Occasional Paper 2006/14.

Valdovinos, J. (2012). The remunicipalisation of Parisian water services. *Water International*, *37*(2), 107-120.

Van Dijk, M. (2008). Role of small-scale independent providers in water and sanitation. *International Journal of Water*, *4*(3-4), 275-289.

WDM (World Development Movement). (2005). *Dirty aid, dirty water*.

WDM (World Development Movement). (2006). *Out of time*.

WDM (World Development Movement). (2007). *Going public: southern solutions to the global water crisis*.

Winpenny, J. (2003). *Financing water for all: report of the world panel on financing water infrastructure*. World Water Council / Global Water Partnership / Third World Water Forum.

WWC (World Water Council). (2005). *Official development assistance for water, 1990-2004*.

42. Ecología política pública: una comunidad de praxis para el cuidado de la tierra*[1]

Tracey Osborne

Resumen: la ecología política es un marco poderoso para analizar las causas subyacentes del cambio ambiental. Sin embargo, se ha utilizado poco para guiar una respuesta ética al Antropoceno. En este trabajo, presento la *ecología política pública* como una forma de practicar una investigación comprometida en este momento de crisis ecológica. La ecología política pública, un proyecto político, ético y educativo, está inspirada por la obra de Antonio Gramsci en *la filosofía de la praxis*, que propone que las ideas sirven como una fuerza material capaz de transformar la sociedad en maneras revolucionarias y usa una *comunidad de praxis* dentro de la cual los académicos pueden tener un papel importante por estar más involucrados con públicos más extensos. Innovaciones de las geografías públicas como la investigación y mapeo acción-participativa, aprender mediante el servicio y los medios sociales ofrecen metodologías y herramientas importantes para esta práctica. Así pues, la ecología política pública es un medio por el que los ecólogos políticos pueden actuar como administradores de la tierra y, de este modo, hacer realidad las reivindicaciones emancipadoras de este campo.

Palabras clave: ecología política, investigación comprometida, administración de la tierra, geografía pública, praxis.

1 Publicado originalmente en: Tracey Osborne, 2017, "Public political ecology: a community of praxis for earth stewardship", *Journal of Political Ecology*, 24(1): 843-860.
*N. de T.: Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original del autor. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

Introducción

El poder potencial de una ecología política popular es tan grande… [y] podría abrir paso a un mundo muy nuevo, que surge de estos tiempos oscuros donde la política progresista tanto en los reinos humanos como no humanos parece estar tan dolorosamente paralizada (Robbins, 2012: 4).

Vivimos en una época sin precedentes —la Era del Antropoceno— que exige nuevas e innovadoras formas de investigación comprometida (Sayre *et al*., 2013). Como término, el Antropoceno se refiere a la era donde el creciente impacto de los seres humanos sobre el planeta amenaza con desestabilizar las dimensiones autosostenibles de los sistemas terrestres (Crutzen, 2002a; Crutzen y Stoermer, 2000). Esta era se caracteriza por una serie de disrupciones ecológicas globales interconectadas (incluyendo el cambio climático, la pérdida de especies y biodiversidad, la deforestación, la acidificación de los océanos, etc.), muchas de las cuales se han aproximado o ya excedido los niveles de seguridad planetarios y que, de no ser atendidas, amenazan con provocar una sexta extinción (Barnosky *et al*., 2011; Kinsford *et al*., 2009; Rockström *et al*., 2009). Aun cuando son globales en su escala, estos procesos tienen implicaciones locales que con frecuencia impactan de forma más severa a comunidades marginadas, profundizando las injusticias históricamente arraigadas. La ecología política es una disciplina poderosa para analizar las causas subyacentes del cambio ambiental, sin embargo, ha sido poco utilizada para guiar una respuesta ética al Antropoceno. En este artículo explico por qué este momento de crisis ecológica requiere de la ecología política pública (EPP), a la que entiendo como una investigación comprometida e informada teóricamente desde una perspectiva de ecología política que actúe mediante una *comunidad de praxis* y guiada por una visión integrada y ética de la gestión de la tierra. Escribo este artículo como una suerte de manifiesto para ecólogos políticos, subrayando no sólo la necesidad crucial de una ecología política comprometida públicamente, sino también la de perfilar críticamente prácticas y significados asociados al cuidado de la tierra en estos momentos de profunda disrupción ecológica.

Desde principios del siglo XXI se han hecho más claros los llamados a una investigación comprometida con los problemas ambientales. A finales de los años noventa, Jane Lubchenco, destacada científica ambiental y entonces presidenta de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, instó a los científicos a adoptar "un nuevo contrato social" para dar prioridad a la investigación de los problemas ambientales más acuciantes y compartir ampliamente estos resultados con los responsables políticos y el público (1998). Los ecologistas, sobre todo los dedicados a la biología de la conservación, han respondido a este llamado mediante la iniciativa Earth Stewardship de la Ecological Society of America, que intenta tender un puente entre las ciencias naturales y sociales, los responsables políticos y la sociedad civil (Chapin III *et al*., 2011). Aunque la iniciativa Earth Stewardship es importante por su orientación hacia la acción explícita, la atención a la ética y el reconocimiento de los conocimiento locales e indígenas, privilegia el conocimiento ecológico y la ciencia de la sostenibilidad mientras ignora en gran medida la economía política y las relaciones de poder, fundamentales para comprender las causas profundas de nuestro estado socioecológico actual (Ogden *et al*., 2013; Sayre *et al*., 2013). Estas respuestas apolíticas al Antropoceno resultarán siempre inadecuadas. Solo si comprendemos las profundas interconexiones de las relaciones socioecológicas a distintas escalas, histórica y geográficamente —prestando atención al poder y a los motores político-económicos, los pilares de la ecología política— podremos entender y responder plenamente a los retos a los que nos enfrentamos en el Antropoceno (Ogden *et al*., 2013).

Como marco analítico, la ecología política reconoce que las cuestiones ambientales no son simples problemas biofísicos que pueden resolverse mediante mecanismo de mercados o soluciones tecnológicas. Por el contrario, entiende los problemas ambientales también como sociales y político-económicos, atravesados por relaciones de poder desiguales. Esta orientación distingue a la ecología política de campos académicos similares como la economía ecológica, que pretende ampliar la teoría económica para incluir el mundo natural y una gama más amplia de valores humanos (Costanza, 1992; Leff, 2015), y de enfoques apolíticos, como el

ambientalismo de mercado que domina el mundo de la política (Anderson y Leal, 2001).

Sin embargo, aunque la ecología política ha sido reconocida por su compromiso con la justicia social y ambiental, su "potencial liberador" (Peet y Watts, 1996) aún no se materializa a plenitud, en parte debido a que su aguda deconstrucción de las perspectivas apolíticas rara vez se acompaña de visiones alternativas del desarrollo o de recomendaciones para el cambio (Blaikie, 1999; Robbins, 2012; Walker, 2006). Aunque la ecología política es fundamental para comprender los contornos y los motores de la actual crisis ambiental, así como las soluciones más equitativas, los análisis que permanecen en los pasillos del mundo académico son insuficientes para la monumental tarea que tenemos frente a nosotros (Blaikie, 2008; 2012). Hace falta una ecología política que se vincule a los debates públicos sobre el cambio ambiental y se esfuerce en formar una conciencia en la sociedad civil con una visión integrada de la gestión de la tierra. Tal como la concibo, la ecología política pública es un proyecto político, ético y educativo inspirado por la obra de Antonio Gramsci sobre la *filosofía de la praxis*. Para Gramsci, la unidad de la teoría y la práctica, o praxis, es especialmente importante durante momentos de transición en la historia, períodos de agitación masiva y crisis (Gramsci, 2012). Estos momentos ofrecen una gran oportunidad para la difusión de nuevas ideas y prácticas. La crisis ecológica y económica inherente al Antropoceno ofrece precisamente ese escenario, abriendo espacio donde nuevos "modos de pensamiento" o "concepciones del mundo" pueden afianzarse, facilitando una transformación social y ambiental potencialmente radical (Gramsci, 2012; Wainwright, 2010). En el mejor de los casos, la EPP podría servir como una *comunidad de praxis* donde las partes interesadas dentro y fuera de la academia trabajen para desarrollar una gestión de la tierra que integre la sostenibilidad ambiental y la justicia social, haciendo un uso cuidadoso y a la vez potente de las innovaciones de las geografías ciudadanas, como la investigación-acción participativa y la cartografía, el aprendizaje del servicio y los medios sociales. La ecología política pública es un medio por el que los ecólogos políticos puedan por fin hacer realidad sus reivindicaciones emancipadoras.

Cuidado de la tierra: prácticas éticas en la era del "Antropoceno"

El término *Antropoceno* puede ser una noción de ecología apolítica (Clarke-Sather *et al*., 2017). Como forma de denominar la crisis actual, "el Antropoceno" responsabiliza de los cambios que afectan a los sistemas terrestres a la especie humana en su conjunto, cuando sería más apropiado atribuirse a la economía de combustibles fósiles y al auge del capitalismo (Malm y Hornborg, 2014; Moore, 2014).[2] A pesar de algunos debates sobre sus orígenes, la mayoría de los estudiosos vinculan el "despegue" del Antropoceno a la Revolución Industrial en Gran Bretaña y Estados Unidos, que impulso al capitalismo gracias al poder de los combustibles fósiles (Crutzen, 2002b; Steffen *et al*., 2007; Zalasiewicz *et al*., 2010). Además, la segunda etapa del Antropoceno, que comenzó en 1945 y se denominó la Gran Aceleración, se caracterizó por un crecimiento económico, una urbanización y una modernización agrícola rápidos y generalizados, pues el modelo industrial de desarrollo del Norte global fue transferido y adoptado por los países del Sur global a medida que abandonaban su condición colonial (Hart, 2001; 2009; Steffen *et al*., 2007). Algunos estudiosos sugieren el término *Capitaloceno* para subrayar el papel de la economía de mercado y el desarrollo basado en los combustibles fósiles en la conformación de la actual crisis ecológica (Haraway, 2015; Moore, 2017).

En la ciencia ambiental hegemónica, el concepto de custodia de la tierra también puede ser apolítico (Ogden *et al*., 2011; Sayre *et al*., 2013). Algunos ecólogos emplean el término *custodia de la tierra* para plantear una nueva y última etapa del Antropoceno marcada por una creciente conciencia del impacto humano en el planeta y el consecuente deseo de mitigar los daños (Ogden *et al*., 2011; Rozzi *et al*., 2015; Steffen *et al*., 2007; 2011). Pero este concepto de custodia puede acarrear los mismos problemas analíticos que el Antropoceno y, además, implica centrarse en soluciones que con frecuencia priorizan arreglos tecnológicos como la geoingeniería o las estrategias de mercado (Steffen *et al*., 2011). Estos esfuerzos son análogos a estrategias de larga data que no abordan las causas profundas del cambio ambiental

2 *N. de T.: La fecha de la cita de Moore (2014) no coincide con la consignada en la lista de referencia. Es un discrepancia de origen.

global, así como a estrategias más recientes que mercantilizan la naturaleza, que reproducen de forma involuntaria desigualdades históricas e injusticias ambientales (Heynen *et al*., 2007; Osborne, 2015).

A pesar de estos defectos, el Antropoceno sigue siendo una poderosa narrativa que, cuando se esgrime desde una perspectiva de ecología política, puede movilizar la acción de forma progresista (Lovbrand *et al*., 2015)[3], y lo mismo puede decirse de la custodia de la tierra. En este artículo, adopto una visión político-ecológica tanto del Antropoceno como de la custodia de la tierra, ubicándolos en un marco de justicia social y ambiental que insiste en integrar de forma estrecha la ciencia y los sistemas socionaturales. Este marco constituye la base teórica para alcanzar un actuar ético en este momento de crisis, un proyecto que requiere del desarrollo de metodologías de investigación interdisciplinarias y asociaciones con las diversas partes interesadas, no solo como sujetos de investigación, sino como coproductores de conocimiento.

Ecología política: posicionamiento y participación política

La ecología política es un campo que se articula en torno a un conjunto de compromisos con la teoría social crítica, la investigación empírica exhaustiva (a veces empleando métodos mixtos cualitativos y cuantitativos) y la justicia social y ambiental (Blaikie, 2012; Bridge *et al*., 2015; Paulson *et al*., 2003; Robbins, 2012). La atención explícita a la justicia, en particular en relación con las comunidades y los paisajes marginados o explotados, ha permitido que el campo desarrolle una sólida teoría del poder y la política (Asher, 2014; Forsyth, 2008; Peet y Watts, 1996; Walker, 2006). Sin embargo, a pesar de estas ventajas y del hecho de que la ecología política surge como una crítica a la escasa atención de la ecología cultural a la economía política y a otras relaciones de poder, desde la década de los noventa la disciplina ha sido cuestionada por su "notable falta de política", en especial en en cuanto a la micropolítica, o lo que Watts ha

3 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

denominado "el ajetreo de la vida cotidiana"[4] (Watts, 1990, pp. 128-29; cf. Peet y Watts, 1996; Walker, 2007). Esta afirmación ha catalizado un debate permanente y una avalancha de literatura que explora la teoría y la práctica de la política, su relevancia y articulación (Bryant, 1991; Escobar, 1996; Forsyth, 2008; Walker, 2007).

Los primeros trabajos sobre ecología política adoptaron un enfoque marxista y se centraron en temas generales como la erosión del suelo, la degradación de la tierra, la deforestación y la hambruna para los factores político-económicos que impulsan el cambio ambiental (Blaikie y Brookfield, 1987; Hecht, 1985; Peluso, 1992; Watts, 1983[5]). Gracias a su atención a la escala, estos trabajos contrarrestaron las narrativas dominantes que culpaban al crecimiento demográfico y a los campesinos de la degradación ambiental, poniendo en primer plano los factores político-económicos. En la década de los noventa, la corriente teórica se desplazó del marxismo al posestructuralismo. Los ecólogos políticos se inspiraban cada vez más en la obra de Foucault para analizar las formas en que la gente común negociaba y luchaba por el acceso a los recursos, prestando atención a la micropolítica en las comunidades, los hogares y los lugares de trabajo y refiriéndose a contextos geográficos más amplios (Escobar, 1996; Paulson *et al*., 2003; Peet y Watts, 1996). Peet y Watts introdujeron las *ecologías de la liberación* como "una ecología política más sólida que integra la política de forma más central, se basa en aspectos de la teoría del discurso que exige que se trate seriamente la política del significado y la construcción del conocimiento" (1996: 3).

4 Aunque es posible que Blaikie haya pasado por alto la micropolítica en su escritura temprana, su obra en su conjunto ejemplificó una orientación aplicada y práctica, en particular su crítica de las narrativas dominantes del desarrollo (Forsyth, 2008; Rocheleu, 2008; Turner, 2014; Walker, 2007). En la introducción a *La economía política de la erosión del suelo en países en desarrollo*, Blaikie escribió "[este] no es un libro neutral. Elige un bando y argumenta a favor de una postura porque la erosión del suelo *es* un asunto político-económico e incluso una posición de pretendida neutralidad se basa en suposiciones partidistas" (1985, p. 1. Subrayado original). Sin embargo, la percibida falta de posicionamiento político en esta obra desató un aumento en la búsqueda, dentro de la escritura de ecología política, de una articulación más profunda con la política en sus múltiples formas.

5 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

Sin duda, las ideas del postestructuralismo han reforzado la capacidad de la ecología política para deconstruir narrativas arraigadas y comprender la subjetividad y la micropolítica. Sin embargo, aunque el enfoque postestructural prometía una ecología política más liberadora, este objetivo aún no se materializa plenamente en la práctica (Walker, 2006; 2007). Sin una hoja de ruta o conjunto de recomendaciones, el énfasis en la deconstrucción y la crítica puede desalentar la articulación activa y desestabilizar categorías clave de identidad y diferencia que suelen movilizar a los grupos marginados (Blaikie, 2012; Fuller y Kitchin, 2004). En respuesta, los ecólogos políticos feministas han analizado la política tratando el género como una variable crítica que se cruza con otras formas de identidad como la raza, la clase y la etnia y que, en conjunto, definen el acceso y el control sobre los recursos (Elmhirst, 2011; Mollett y Faria, 2013; Rocheleau *et al*., 1996). Otros han recurrido al llamado de Gramsci a articularse con la política cultural de la naturaleza (Moore, 1993; 2005; Yeh, 2007).

Una reciente e interesante serie de académicos ha tratado de desarrollar de forma más explícita el enfoque gramsciano de la ecología política, para profundizar y afinar las posibilidades de la política y la articulación (Ekers *et al*., 2009[6]; Karriem, 2009; Loftus, 2013; Mann, 2009; Perkins, 2011). Una ecología política gramsciana nunca es sólo académica o analítica, sino explícitamente política y normativa (Ekers *et al*., 2009; Perkins, 2011); presta atención a las relaciones económicas, así como al campo moral de la ética, es decir, la "eticopolítica" (Mann, 2009); y proporciona una visión amplia del poder mediante el concepto de hegemonía, que se materializa en complejas formas de poder y consentimiento histórica y geográficamente específicas (Karriem, 2009). Además, la ecología política gramsciana subraya la importancia de la cultura y la ideología para entender los conflictos por los recursos ambientales y entiende las luchas por los recursos como luchas simultáneas por el significado (Berry, 1993; Moore, 1993), reconociendo la relación dialéctica y mutuamente constitutiva entre naturaleza y sociedad (Karriem, 2009; Loftus, 2013). Para Gramsci (2012), la praxis es

6 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

una "actividad crítico-práctica" en la que la teoría debe ponerse en práctica para que cobre sentido (Blaikie, 2012).

En la década de los noventa, los enfoques feministas de la ecología política fueron los primeros en considerar seriamente la investigación comprometida como vía para empoderar a las comunidades (Rocheleau *et al*., 1996). En el centro de estos esfuerzos se hallaba el énfasis en el poder-conocimiento, los derechos y la justicia ambiental, así como el activismo de base. Por ejemplo, Fortmann (1996) sostiene que los métodos de investigación participativa basados en la comunidad, como la cartografía de recursos, no solo son una forma eficaz de recopilar datos, sino un medio de empoderar a los investigadores de las poblaciones, así como a sus comunidades en general. Aunque menos vinculadas a la crítica político-económica, estas primeras incursiones insistieron en considerar la política de producción de conocimientos.

Los ecólogos políticos también han participado en el ámbito de la política pública, aunque la relación suele ser tensa y ambivalente (Blaikie, 2008; Walker, 2006). En los estudios sobre política pública se suele dar por sentado que los académicos que se dedican a la política son objetivos y se limitan a proporcionar información para que las instituciones estatales la interpreten y apliquen; por tanto, el mundo de la política suele entrar en conflicto con las críticas agudas y los compromisos explícitamente normativos de la ecología política. No obstante, muchos ecólogos políticos trabajan de forma directa en el ámbito de la política, sorteando con cuidado las trampas de la cooptación y concesiones (Rocheleau, 2008; Walker, 2006).[7] Otros sostienen que los ecólogos políticos pueden trabajar con socios aliados —por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, filántropos, medios de comunicación y comunidades— para llevar a cabo una estrategia a más largo plazo e indirecta para influir en la política (Blaikie, 2008; Rocheleau, 2008; Walker, 2007). Sus intervenciones sugieren que los límites entre la política y su aplicación pueden ser, de hecho, bastante porosos, una realidad que Bebbington subraya utilizando el término en español *la política*, que describe tanto la

7 Algunos ecólogos políticos que han incidido en políticas públicas incluyen Kiran Asher, Anthony Bebbington, Piers Blaikie, Diana Liverman, Joshua Muldavin y Dianne Rocheleau

política como negociación como la política como norma, señalando que la política es la lucha continua por la asignación de recursos y el significado establecido en políticas públicas ya establecidas (2014; 2015).

Por último, los ecólogos políticos que se ocupan de la articulación también han trabajado con movimientos de justicia social y ambiental, lo que no es una verdadera sorpresa dada la larga relación del campo con el activismo y su preocupación por la marginación (Blaikie, 2012; Escobar, 1998; Forsyth, 2008; Heynen y Van Sant, 2015; Robbins, 2012; Walker, 2007). Este tipo de interacción ha sido descrita por Rocheleau como *ecología política práctica*, la que define como una "forma experimental de investigación crítica y aplicada en busca de modelos más democráticos y eficaces de colaboración con movimientos sociales, ong y grupos de base" (2008: 723). Para Walker, la *ecología política popular* tiene objetivos similares, "vinculando directamente la investigación a los esfuerzos de activistas para mejorar el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental a través de diversas formas de activismo y organización local de base" (2007: 364). Heynen y Van Sant (2015) ven el activismo como una forma de política de acción directa (es decir, que opera al margen del aparato y la lógica formal del Estado) que puede aportar ideas para versiones más radicales de articulación dentro de la ecología política. Por su parte, Dwyer y Baird (2014) afirman que, ya sea en colaboración con responsables políticos, movimientos sociales u otros científicos, la acción debe ser "ética y estratégica a la vez", una forma de *articulación basada en principios*. Con independencia de cómo se articulen las particularidades del acuerdo, es probable que la articulación a largo plazo de la disciplina con los movimientos sociales y el activismo se fortalezca, en especial en estos tiempos de desafíos político-ecológicos (Batterbury, 2016; Heynen y Van Sant 2015).

En resumen, los ecólogos políticos han desplegado una serie de estrategias para comprometer al mundo en general mediante la política y el activismo. Pero, independientemente de sus ideas, en esta literatura falta la articulación con públicos más amplios dentro de la sociedad civil. El término *público*, complejo y muy debatido, puede entenderse como una sociedad civil diversa dentro de la esfera pública que dialoga y puede influir en los procesos políticos democráticos (Fraser, 1990; Habermas, 1991). El monopolio y la parcialidad de

los medios de comunicación dominantes incrementan la necesidad de nuevas formas de articulación y divulgación con estos públicos, y la multiplicación de los medios sociales ofrece esa posibilidad. En este sentido, las ideas de las "geografías públicas" pueden ser útiles para la EPP, ya que hacen hincapié en las políticas de relevancia.

Geografías públicas y las políticas de la relevancia

El giro hacia lo público en la geografía hace hincapié en la importancia de la relevancia, la investigación comprometida, los métodos participativos y el uso de los medios sociales; contribuciones clave al campo de la EPP. La geografía ha mostrado durante mucho tiempo una orientación práctica, y a finales de los años sesenta y principios de los setenta los geógrafos humanos críticos iniciaron un importante debate sobre la relevancia de la disciplina (Chisholm, 1971; Oglesby, 2006; Staeheli y Mitchell, 2005). La pertinencia se entiende en un sentido amplio como la capacidad de la investigación académica para trascender el ámbito académico y llegar a un público más allá de la academia y al mundo en general. Dado que la sociedad se compone, por supuesto, de múltiples públicos con intereses diversos, es esencial preguntarse: ¿para quién es más relevante nuestro trabajo y quién en última instancia se beneficia de nuestra investigación (Dwyer y Baird, 2014; Harvey, 1974)?

Tomando estas cuestiones como punto de partida, la geografía pública opera en múltiples ámbitos de articulación: la investigación aplicada orientada a las políticas que sirve a las necesidades de un cliente concreto del Estado, el activismo académico que trabaja con ong y movimientos sociales de base, y la sociedad civil (Blomley, 2008; Castree, 1999; Chatterton, 2006; Derickson y Routledge, 2015; Martin, 2001; Martin y Sunley, 2010; Peck, 1999; Pulido, 2008). En su discurso presidencial de 2005 de la Asociación Americana de Geógrafos (AGG), Alexander Murphy instó a los geógrafos a participar de manera más activa en las esferas y debates públicos (Murphy, 2006). Aunque esta labor supone lógicamente la participación de la sociedad civil, esto no significa ignorar el ámbito de la política. Al transformar la comprensión social de cierta cuestión,

la participación pública y otras acciones pueden conducir a resultados políticos más progresistas (Massey, 2002; Murphy, 2006; Ward, 2006). En última instancia, ya sea trabajando directamente con los responsables políticos, los movimientos sociales u otros grupos sociales, el objetivo de la geografía pública es generar conocimientos que, de alguna manera, hagan del mundo un lugar más justo desde el punto de vista social y más sostenible desde el punto de vista ambiental (Mitchell, 2008; Murphy, 2006). Dada nuestra posición privilegiada como productores de conocimiento con relativa libertad de expresión, los académicos tenemos la responsabilidad de compartir ampliamente el conocimiento para dicho fin (Asher, 2014; Kitchin y Hubbard, 1999).

Los geógrafos públicos emplean diversos enfoques, entre ellos métodos participativos y descolonizadores. La investigación-acción participativa (iap) es un enfoque que cuestiona las formas tradicionales de investigación, consideradas jerárquicas y extractivas, e intenta democratizar la recopilación de datos, la selección de preguntas y el análisis trabajando en colaboración con socios no académicos en la coproducción de conocimiento (Cahill, 2007; Kindon *et al*., 2009; Pain *et al*., 2013). En gran medida, la iap se distingue de otros enfoques ya que su objetivo no es solo estudiar y analizar el mundo, sino promover metas de justicia social (Cahill, 2007; Pratt, 2000[8]). Una forma de iap, el mapeo participativo, pretende abordar las preocupaciones críticas que rodean a la cartografía tradicional y los sistemas de información geográfica (SIG), en particular las cuestiones de acceso y poder desiguales, las políticas de representación y la dependencia del conocimiento experto, incluyendo directamente a las comunidades en el proceso de mapeo (Bryan, 2015; Elwood, 2006; Nietschmann, 1995; Peluso, 1995). La cartografía participativa y los sig, que constituyen un conjunto diverso de prácticas cartográficas, son quizá las más controvertidas de las metodologías par (Bryan, 2015; Elwood, 2006). Los críticos no están convencidos de que estos proyectos participativos puedan evitar los peligros generales de las prácticas cartográficas, es decir, la comprensión estática de procesos dinámicos, relaciones de poder desiguales y formas cartesianas de conocimiento que

8 N. de T.: Esta cita no se encuentra en la lista de referencias de este artículo. Es una supresión de origen del artículo original.

refuerzan dualismos problemáticos entre naturaleza y sociedad (Bryan, 2015; Rocheleau, 2005). Los resultados más extremos de los sig participativos pueden derivar en situaciones problemáticas de *geopiratería*,[9] como demuestran claramente las prácticas poco éticas de la Expedición Bowman, que extrajo información geográfica de las comunidades de Oaxaca, México, sin revelar sus vínculos con el Ejército estadounidense (Bryan, 2015; Wainwright, 2012). Dadas estas preocupaciones válidas sobre la rpa en general y la cartografía participativa en particular, ¿debemos abandonar estas herramientas por completo? Estoy de acuerdo con Sarah Elwood (2006), quien argumenta que lo que está en juego es demasiado importante como para rechazar los métodos participativos y que, por el contrario, debemos seguir utilizándolos, siendo especialmente conscientes de la política y el poder.

Otra herramienta cada vez más importante en la geografía pública crítica son los medios sociales, incluidos los *blogs*, las redes sociales, el intercambio de fotos y videos, y los sitios de autoría colectiva como Wikipedia (Kitchin *et al*., 2013, Sui y Goodchild, 2011). Los geógrafos de todos los rangos, incluidos los estudiantes de posgrado, utilizan cada vez más los medios sociales para llegar a públicos amplios (Kitchin *et al*., 2013). En el mejor de los casos, esta actividad puede constituir la base de un tipo de "praxis digital", la cual facilita intervenciones críticas oportunas y crea relaciones nuevas y fortalecedoras entre académicos y activistas (Kitchin *et al*., 2013). También pueden ser una alternativa a los principales medios de comunicación y han sido utilizadas por movimientos sociales para organizarse y movilizarse (Juris, 2012), al tiempo que impulsan a los académicos a pensar de manera diferente sobre cómo planteamos preguntas de investigación, articulamos ideas y difundimos nuestros escritos (Kitchin *et al*., 2013). Sin embargo, las redes sociales plantean una serie de cuestiones más complejas, sobre todo en relación con el acceso y representación desiguales propios de medios de comunicación altamente comercializados, y a la contribución de las redes sociales a un activismo efectivo y no sólo simbólico (Carroll y Hackett, 2006; Valenzuela, 2013). Aunque estas preocupaciones deberían hacer reflexionar a los estudiosos de lo público, al igual que el mapeo participativo, los medios

9 La geopiratería se refiere a la extracción de información geográfica de las comunidades para subvertir la tenencia de la tierra, cercar terrenos, tomar recursos o como parte de esfuerzos contrainsurgentes.

sociales constituyen herramientas poderosas que no deben ignorarse y, si se utilizan de forma crítica y reflexiva, pueden proporcionar un espacio digital importante para la colaboración, la creación de alianzas y articulaciones (Kitchin *et al*., 2013; Sui y Goodchild, 2011).

Por supuesto, no todos los académicos desean utilizar las redes sociales o difundir su trabajo de forma pública, por ejemplo, escribiendo artículos de opinión o produciendo documentales. Tampoco todos los estudios conducen de forma inmediata u obvia a esa articulación pública. En el mundo académico, siempre debe haber espacio para la exploración intelectual con el fin de avanzar en la teoría y la investigación básica (Lave, 2014). Por tanto, la geografía pública es practicada por académicos que se ven obligados a comprometerse con el mundo en general y que consideran que la investigación que realizan es importante y oportuna para compartir (Castree, 2006; Murphy, 2006). Para estos académicos, comprometerse con lo público no está libre de riesgos y desafíos (Fuller, 2008; Hale, 2008; Mitchell, 2008). La investigación comprometida lleva tiempo y rara vez es reconocida en la carrera académica y la titularidad, lo que significa que con frecuencia es desarrollada por profesores a mitad de carrera y superiores (Castree, 2013, Pulido, 2008). Además, algunos académicos temen que la articulación, en particular el activismo académico, pueda empañar su trabajo académico al ser visto como no objetivo y abierto al escrutinio (Kitchin y Hubbard, 1999; Mitchell, 2008). Dado que la neutralidad en la investigación ha sido ampliamente debatida, y en gran medida desacreditada, una postura ética exige que seamos más explícitos sobre los compromisos políticos que informan nuestro trabajo (Martin, 2001; Said, 1978; Tandon, 1988). Para los ecólogos políticos que están profundamente comprometidos con la justicia social, el imperativo es realizar una investigación rigurosa basada en la ética e identificar los procesos, las personas y los lugares para los cuales, para quién y dónde se necesita y desea la investigación-acción participativa (Forsyth, 2008).

A pesar de los retos, muchos investigadores comprometidos insisten en la responsabilidad moral y social que tenemos como académicos para utilizar nuestra formación y acceso a los recursos y la información en beneficio público (Elwood, 2006; Kitchin y Hubbard, 1999). La EPP adopta plenamente

esta responsabilidad moral y social para orientar la formación y experiencia académica a concretar el potencial liberador de la disciplina.

Ecología política pública: una comunidad de praxis

La ecología política se ha descrito como una *comunidad de praxis*, compuesta por académicos y no académicos, de organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos estatales, instituciones internacionales y medios de comunicación, que en diversos grados participan en la crítica, el análisis y la acción en torno a una serie de cuestiones ambientales y procesos socionaturales (Robbins, 2012). Aunque los ecologistas políticos académicos son muy competentes en el análisis, la deconstrucción y la crítica, en general han demostrado menos destreza a la hora de proponer soluciones y fomentar la acción para el cambio social, es decir, la práctica de la articulación (Blaikie, 2008; Robbins, 2012). Por su parte, los actores de las ong pueden centrarse más en acciones socialmente comprometidas sin prestar la debida atención a las herramientas críticas de la teoría o el análisis. Como *comunidad de praxis*, entonces, la ecología política podría carecer de la sólida integración de teoría y práctica, así como de la interacción, la retroalimentación constante y el aprendizaje colectivo asociados desde hace tiempo con el término (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998). Además, el término *comunidad de praxis* ha pasado a significar cada vez más una herramienta de gestión con fines lucrativos en el sector privado (Cox, 2005). En consecuencia, la EPP podría describirse mejor como una *comunidad de praxis*. Como tal, la EPP se define como la práctica teóricamente informada de un conjunto diverso de agentes (entre los que se incluye un importante papel para los académicos) que comparten preocupaciones ambientales, colaboran y coproducen conocimientos con el fin de orientar la acción ética para la custodia de la tierra.

Si bien la obra de Gramsci es compatible con la de otros intelectuales críticos de la práctica —por ejemplo, Paulo Freire y Bell Hooks, que centran su trabajo en la pedagogía de la liberación de personas marginadas por motivos de raza, clase y género (Freire, 2000; Hooks, 2014)—, también proporciona una comprensión de la *coyuntura* y de cómo las fuerzas

políticas, económicas y culturales interactúan en momentos críticos para la transformación social. Los escritos de Gramsci sobre la filosofía de la praxis son útiles en particular para el desarrollo de la EPP. Mientras que algunos han argumentado que Gramsci utilizó el término *praxis* como una palabra clave para señalar el marxismo y evitar el escrutinio de los guardias de la prisión (Anderson, 1976), su trabajo sobre la filosofía de la praxis sugiere que la concibió como una forma de teorizar la relación entre la teoría y la práctica en una extensión del trabajo de Marx sobre las *Tesis sobre Feuerbach* (Loftus, 2013; Thomas, 2009). Para Gramsci, la praxis es la relación recíproca entre pensamiento y acción donde las ideas se convierten en una fuerza material para el cambio social emancipador. La filosofía de la praxis es un proyecto educativo y político que pretende desarrollar y renovar el pensamiento crítico en las esferas públicas y ampliar la conciencia de las causas político-económicas y la historia de las ideas que constituyen el *sentido común* (Monasta, 2002). El objetivo es facilitar un pensamiento coherente y cultivar una *sensatez* que permita a las personas marginadas ser más capaces de construir la "política contrahegemónica" necesaria para dirigir sus propias vidas (Gramsci, 2012; Karriem, 2009: 318). Según Gramsci:

> Una filosofía de la praxis no puede más que presentarse al inicio bajo un disfraz polémico y crítico, como supeditando el modo de pensamiento existente y el pensamiento concreto existente (el mundo cultural existente). Por tanto, debe ser en primer lugar una crítica del "sentido común" y sin embargo basarse inicialmente en el sentido común para demostrar que "cualquiera" es filósofo y que no se trata de introducir de cero una forma científica de pensamiento en la vida individual de cada persona, sino de renovar y hacer "crítica" una actividad ya existente (Gramsci, 2012: 330-331).

Para Gramsci, la práctica parte de la premisa de que todos somos filósofos, y comienza con un cuestionamiento del sentido común para renovar y considerar críticamente "la actividad ya existente" (2012: 331). La teoría crítica es la manera más apropiada de entender y guiar este proceso. Es crucial que el proyecto de Gramsci no termine con la crítica, sino que la utilice como trampolín para la acción:

> Crear una nueva cultura […] significa la difusión en clave crítica de verdades ya descubiertas, su "socialización" podría decirse, e incluso el convertirlas en la base de la acción vital, en un elemento de coordinación y de orden moral e intelectual (2012: 325).

Interpreto este llamado a unificar teoría y práctica, pensamiento y acción, como una invitación a desarrollar comunidades de praxis por medio de las cuales podamos renovar y profundizar en el potencial liberador de la ecología política como vehículo para la gestión de la tierra.

La acción de la EPP, teóricamente fundamentada, tiene lugar justo en una *comunidad de praxis* de este tipo: un grupo diverso y cohesionado de actores que se relacionan entre sí de forma horizontal, en redes y por medio de ellas, para crear alianzas. Aunque los estudiosos nos alertan con razón "contra el romanticismo de la comunidad" (Joseph, 2002), en este contexto la comunidad se vincula a la comprensión de los bienes comunes como un "proyecto contrahegemónico" de gestión colectiva, que cuestiona intervenciones que polarizan los escenarios sociales como el acaparamiento de los recursos colectivos por el mercado y la mercantilización de la naturaleza (Bakker, 2007; Karriem, 2009; McCarthy, 2005: 9). Una comunidad de este tipo puede estar compuesta de académicos, personal de ong, grupos de la sociedad civil, periodistas, pueblos indígenas y otros grupos marginados, organizaciones religiosas, ciudadanos preocupados, propietarios de empresas locales sostenibles y filántropos que combinan sus capacidades de investigación, política, educación, análisis, organización, producción y recaudación de fondos en pro de objetivos compartidos, y colaboran para expandir los resultados más allá de lo podrían lograr individuos y grupos más pequeños por sí solos. Por supuesto, los miembros de estos grupos son heterogéneos, están ubicados de forma desigual y probablemente tengan puntos de vista diferentes sobre determinadas líneas de acción. Aunque no está libre de dificultades, la EPP considera que la colaboración crítica y deliberada, así como la creación de alianzas son esenciales para producir una transformación social radical. Según Gramsci:

> Se dirá que lo que cada individuo puede lograr es muy poco, considerando su fuerza. Es verdad hasta cierto punto. Pero cuando el individuo puede asociarse con otros individuos que procuran los mismos cambios, y si los cambios deseados son racionales, el individuo puede multiplicarse un número impresionante de veces y obtener un cambio mucho más radical de lo que a primera vista parecía remotamente posible (2012: 353).

La colaboración dentro de una *comunidad de praxis* amplifica la eficacia y el poder no solo por medio del número de individuos que unen sus fuerzas, sino también por la creación de redes estratégicas y el impulso a la coproducción táctica de conocimientos.

Aquí, una definición amplia de "intelectual" es esencial, ensanchando el significado de la colaboración dentro de las comunidades de praxis y profundizando el compromiso de la EPP con las propuestas latinoamericanistas, indígenas y posthumanistas, para descolonizar la producción de conocimiento y reconocer la agencia tanto en el mundo humano como en el no humano, así como la interconexión de toda la vida (Berkes, 2012; Ogden *et al*., 2011; Sundberg, 2014). Esta comprensión del trabajo intelectual también puede ayudar a cuestionar las fuerzas que comodifican a la naturaleza y priorizan los valores económicos por encima de los sociales, culturales y sagrados (Polanyi, 2001). Es a partir de este sentido amplio del propósito que los ecólogos políticos ciudadanos pueden analizar, criticar y desafiar de forma eficaz los discursos, paradigmas e instituciones apolíticas, y construir visiones alternativas para la transformación social.

La ecología política pública: el papel del intelectual

Gramsci consideraba que el ámbito de la educación era fundamental para la liberación de grupos marginados y reconocía como terreno de lucha aquel donde los grupos dominantes mantienen el poder consolidando el consentimiento popular como base de la hegemonía (Borg *et al*., 2002; Hall, 1986; Monasta, 2002). Aunque sostenía que todo el mundo es un intelectual, Gramsci entendía que la actividad filosófica que realizan los intelectuales formales (académicos) era fundamental para vencer las luchas culturales e ideo-

lógicas inherentes al capitalismo y, en última instancia, para transformar la conciencia popular del *sentido común* a la *sensatez* (Monasta, 2002). Además, los académicos aportan legitimidad social y moral, y poseen acceso a recursos relacionados con la investigación, por lo que tienen la responsabilidad de actuar —en particular en una época de crisis socionaturales cada vez más intensas e interconectadas— (Hall, 1986; Sayre *et al*., 2013). De hecho, las crisis suelen catalizar la desintegración de lo que Gramsci denominó hegemonía burguesa, donde los intereses burgueses se representan como los intereses de todos, estas crisis abren espacio para que grupos subordinados asuman el liderazgo. La crisis ecológica inherente al Antropoceno podría proveer ese efecto catalizador. Mientras que liderazgo proviene de un *bloque histórico*, los intelectuales, en particular aquellos pertenecientes a grupos subordinados ("intelectuales orgánicos", en términos de Gramsci) proporcionan liderazgo a la sociedad mediante la educación, y articulan una visión amplia de cambio que genera nuevas *concepciones del mundo* (Gramsci, 2012). En contacto más constante con diversos grupos sociales, los intelectuales orgánicos conciben preguntas de investigación que surgen a partir de esas relaciones (Gramsci, 2012).

La EPP opera en la intersección de la investigación, la docencia y el servicio, tres pilares del trabajo académico que, dentro de este marco, se entrelazan profundamente y comparten los mismos valores. Desde el punto de vista estructural, puede resultar difícil para los académicos seguir un programa de este tipo. Aunque muchas universidades e instituciones de financiamiento aseveran valorar la labor académica comprometida con la comunidad, en la práctica existen numerosas limitaciones estructurales e institucionales que relegan este trabajo a la categoría de "servicio", el tipo menos relevante para la promoción y la seguridad laboral en muchos países occidentales (Whitmer *et al*., 2010). Estas barreras pueden superarse, de forma más inmediata, mediante un proceso que vincule cuidadosamente la investigación y permita su participación simultánea en los debates teóricos actuales, la satisfacción de los intereses de colaboradores no académicos y en considerar intereses más amplios de los públicos o instituciones a quienes sirve el análisis (Derickson y Routledge, 2015). Este tipo de investigación orientada al servicio informa, a su vez, a la pedagogía crítica en

el aula, un sitio importante para la articulación de los ecólogos políticos (Jarosz, 2004).

Aunque la pedagogía no es un tema habitual en la ecología política, algunos autores han identificado la enseñanza como un lugar descuidado para la praxis política (Heyman, 2000; Jarosz, 2004). La pedagogía crítica es un ámbito importante para la ecología política, ya que los estudiantes representan un público importante para el cambio social (Jarosz, 2004; Jarosz y Johnson-Bogart, 1996; Petrina, 2000). Jarosz considera que el aprendizaje por medio del servicio es una valiosa herramienta pedagógica que contribuye a un proyecto más amplio de formación comprometida, haciendo que la ecología política sea más concreta para los estudiantes al anclar la teoría a los problemas y preocupaciones locales (2004). Las universidades están formando cada vez más asociaciones entre el campus y las comunidades que aportan a los estudiantes experiencias de articulación y a las comunidades la investigación necesaria, una poderosa combinación para el cambio social (Peterson, 2009).[10] Junto con las metodologías descolonizadoras para la coproducción de conocimiento, la formación en aprendizaje servicio, IAP, ética en el trabajo de campo y otras herramientas pedagógicas son, por tanto, fundamentales para el desarrollo de la EPP.

Al operar en el ámbito del servicio, la EPP reconoce el imperativo moral de los académicos de participar en los debates públicos. Los ecólogos políticos tienen tanto la formación como la legitimidad para hablar de diversas cuestiones ambientales y contextualizarlas desde las perspectivas histórica y geográfica. Por tanto, la educación popular se ocupa fundamentalmente de la educación fuera de los espacios académicos formales. Los ecologistas políticos pueden actuar como intelectuales ciudadanos que se comprometen con la sociedad civil, abordan asuntos de interés público y ofrecen sus opiniones sobre el estado de la sociedad (Ward, 2007). Sin embargo, el término de intelectual ciudadano puede sonar grandilocuente y a menudo provoca cierta incomodidad como autoadscripción, por lo que muchos académicos

10 Reseed, fundado por la ecóloga política Haripriya Rangan con sus antiguas alumnas en Australia, es un emprendimiento social que busca llevar a cabo programas de trabajo de campo que tengan un compromiso a largo plazo con hospedar comunidades en el sur de África (Rangan, 2017). Cf. http://www.reseed.com.au

dudan en asumir tal posición (Castree, 2006). La EPP reconceptualiza esta posición del intelectual ciudadano, desafiando la noción de que solo unos cuantos académicos tienen autoridad pueden hablar, y, al contrario, reconoce que como académicos formados estamos más que calificados para participar en debates públicos apoyados en nuestros conocimientos y experiencia. Además, como no solo somos académicos, sino que también formamos parte de comunidades concretas, podemos hablar como expertos —un tipo de conocimiento distante—, así como desde la experiencia directa —un conocimiento más íntimo—. Al involucrar cada vez más al público desde una perspectiva de ecología política, como académicos en una *comunidad de praxis*, podemos modificar el debate público, activando una crítica del *sentido común* y una articulación más liberadora con el mundo. Una vez más, esto nos devuelve a la insistencia de Gramsci en que todo el mundo es filósofo, lo cual amplía el significado y la práctica del intelectual más allá de unos cuantos elegidos (2012).

Ecologías políticas públicas ya existentes

Los ecólogos políticos ya están involucrando estratégicamente a múltiples públicos mediante, por ejemplo, *blogs*, artículos de opinión, documentales y cursos masivos abiertos en línea (mooc, siglas en inglés).[11] Ejemplos concretos de ecología política comprometida con el público desarrollados en universidades incluyen el Atlas Global de Justicia Ambiental o EJAtlas[12] de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Laboratorio de Ecología Política Pública de la Universidad de Arizona. El EJAtlas es un proyecto participativo y colaborativo para cartografiar los conflictos ambientales globales, coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA)[13] (Temper *et al*., 2015). El EJAtlas es un "recurso didáctico, de creación de

11 Véase la página electrónica del Laboratorio de Ecología Política Pública para ejemplos de la investigación comprometida de los académicos, http://ppel.arizona.edu

12 Inicialmente un proyecto de Ejolt (Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidades Civiles e Intercambio), el EJAtlas está siendo expandido y coordinado por los programas de envjustice (director, Joan Martínez-Alier). http://www.envjustice.org y http://acknowlej.org (director, Leah Temper).

13 Institut de Ciència I Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona.

redes y de promoción" que pretende hacer visibles los conflictos ambientales en todo el mundo (EJAtlas, 2016). Se trata de un proyecto político y educativo por medio del cual los investigadores trabajan con activistas de movimientos sociales para identificar conflictos sobre los recursos y poner esa información a disposición del público en una plataforma *web*. Los resúmenes detallados de los conflictos ambientales y de las principales actores involucrados permiten la defensa táctica, la creación de alianzas y la acción. El EJAtlas construye una *comunidad de praxis* utilizando teorías de justicia ambiental y metodologías iap para vincular a científicos, organizaciones activistas y responsables políticos en torno a cuestiones de distribución ecológica, mientras hace visibles las luchas por los recursos a un público más amplio (Temper *et al*., 2015).

Otro ejemplo de ecología política en acción es el Laboratorio de Ecología Política Pública (PPEL, siglas en inglés), que trabaja en la investigación, la docencia y la prestación de servicios. Reconociendo la importancia de una perspectiva de ecología política para la justicia social y ambiental a largo plazo y su relativa ausencia del debate público, en 2011 inicié el PPEL con estudiantes de posgrado de la Facultad de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona. El PPEL es un proyecto colaborativo de formación comprometida y teóricamente informada que proporciona una plataforma para la educación pública, apoya las necesidades de investigación de las ONG y los movimientos sociales, y proporciona recursos pedagógicos a los académicos y estudiantes de ecología política. El Laboratorio ofrece un espacio digital para que los ecólogos políticos comuniquen sus investigaciones a un público amplio mediante el uso de redes sociales, *blogs*, videos y ensayos fotográficos. El sitio en red del ppel incluye *blogs* especializados en temas ambientales actuales, escritos por ecólogos políticos expertos en la materia. También presenta videos cortos donde ecologistas políticos consagrados y que inician su formación hablan de su práctica de la investigación comprometida. Estos videos son una importante herramienta pedagógica que muestra las diversas formas en que los ecólogos políticos se relacionan con el público, que muchas veces no son evidentes en sus trabajos publicados o en los sitios red de sus facultades. El ppel ofrece así una plataforma para la educación popular y la pedagogía radical.

Una de las iniciativas más recientes del Laboratorio es el Proyecto de Cartografía de la Alianza Climática (CAMP, siglas en inglés),[14] un esfuerzo de colaboración entre académicos, ong ambientalistas y organizaciones indígenas para abordar el cambio climático mediante la creación de mapas multimedia interactivos y un portal electrónico que pretende convocar a múltiples públicos, crear redes de activistas y comunidades y sustentar decisiones políticas. Siguiendo la filosofía de la praxis de Gramsci, pretende unir teoría y práctica mediante la investigación-acción participativa y la cartografía. Los principales objetivos del camp son crear coaliciones entre organizaciones de justicia climática y proporcionar una plataforma para relatos digitales visualmente impactantes sobre el desarrollo de los combustibles fósiles y las transiciones hacia las energías renovables. El enfoque de investigación del camp se basa en las teorías de ecología política sobre la marginación, los conflictos por los recursos, los movimientos sociales y los bienes comunes. Está motivado por el compromiso con la justicia social y ambiental; además, esta praxis tiene lugar en las comunidades, manteniéndose en comunicación dinámica con el trabajo y las prioridades de las organizaciones ambientales y los grupos indígenas. De este modo, el camp trabaja para construir un bloque intelectual-moral contrahegemónico, parte esencial de la filosofía de la praxis, por medio de colaboraciones con diversos actores, sintetizando información y presentándola en plataformas multimedia de formas visualmente potentes y accesibles a todo público (Gramsci, 2012).

Desde su fundación, el camp se desarrolló dentro de una amplia *comunidad de praxis*. La idea del camp surgió de conversaciones con el personal ejecutivo de Amazon Watch,[15] una ong ambiental que colabora con comunidades indígenas para garantizar sus derechos y proteger la selva amazónica. Como parte de una alianza de más de cincuenta organizaciones ambientales

14 El equipo del camp responsable de lanzar el proyecto incluye profesores de la Universidad de Arizona —los Dres. Jaime A. Lee y Benedict Colombi— y alumnos del posgrado de Geografía: Remington Franklin, Megan Mills-Novoa y Kristine (Stina) Janssen. Este proyecto es posible gracias al financiamiento de parte de la Fundación Robert and Patricia Switzer. https://climatealliancemap.org

15 La idea para el camp surgió de conversaciones con Atossa Soltani, la fundadora y antigua directora ejecutiva de Amazon Watch, quien actualmente funge como la presidente de la mesa directiva, y con la actual directora ejecutiva de la organización, Leila Salazar-López.

y de derechos indígenas que trabajan por la justicia climática, Amazon Watch expresó su interés por un mapa que identificara las zonas donde de forma prioritaria los combustibles fósiles debían mantenerse bajo tierra. Este mapa parte de investigaciones científicas que reconocen la necesidad de dejar los combustibles fósiles sin quemar y para lograr mantener las temperaturas globales por debajo de un aumento de dos grados centígrados en relación con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo, McGlade y Ekins (2015) sostienen que entre 2010 y 2050 deberían dejarse bajo tierra un tercio de las reservas mundiales de petróleo, la mitad del gas y más de 80% de las de carbón. Su estudio emplea un cálculo económico para determinar estos yacimientos; en cambio, camp adopta un enfoque de ecología política que identifica áreas ecológica y culturalmente importantes como zonas prioritarias, según la evaluación de las organizaciones ecologistas e indígenas con las que colaboramos. En el futuro, se añadirán historias digitales al mapa para ampliar las voces de las comunidades marginadas y animar a las organizaciones de todo el continente americano a extender sus alianzas en apoyo de la justicia climática. Al promover estrategias para "alianzas complejas" (Hall, 1986), este proyecto se alinea claramente con la perspectiva gramsciana.

EJAtlas y el camp son experimentos en curso de *contramapeo global* que utilizan sig para complementar las luchas activistas por la justicia ambiental y climática. Basados en buena medida en los métodos iap y la cartografía participativa, estos esfuerzos pretenden ir más allá de la crítica y la deconstrucción para orientarse hacia la coproducción del conocimiento al servicio de los movimientos sociales en áreas específicas (Temper y Del Bene, 2016). Sin duda, es probable que estos proyectos incipientes experimenten los mismos desafíos que esfuerzos anteriores de iap y cartografía participativa, e incluso que experimenten otros nuevos. Por ejemplo, podríamos cuestionar las implicaciones de hacer visibles los conflictos ambientales en torno a recursos altamente politizados como el petróleo, y exponer historias de los pueblos marginados en primera línea. Este tipo de cuestiones éticas deben ser consideradas y abordadas con sumo cuidado, yendo más allá de los sistemas convencionales de ética de la investigación aplicados por la Junta de Revisión Institucional. Además, los investigadores que participan en proyectos como

EJAtlas y camp deben ser críticamente reflexivos y estar atentos con todo rigor a las cuestiones de poder y acceso inherentes al proceso.

Conclusión

Las alteraciones sociales y ambientales del Antropoceno exigen nuevas formas de articulación por parte de los ecólogos políticos interesados en actuar. He presentado la ecología política cívica (EPP) como una perspectiva y un enfoque que podría apoyar el desarrollo de una gestión integrada de la tierra. Basada en una perspectiva gramsciana, la EPP constituye una *comunidad de praxis* donde los académicos desempeñan un papel importante en la renovación del pensamiento coherente y crítico capaz de transformar la conciencia popular, convirtiendo el *sentido común* en *sensatez*. Las crisis ecológicas/económicas del Antropoceno proporcionan el espacio para que este tipo de pensamiento coherente y las nuevas *concepciones del mundo* puedan echar raíces. Esta perspectiva impulsa la capacidad crítica ya existente en la sociedad y abre el camino a la posibilidad de un mundo más sostenible desde el punto de vista ambiental y más justo desde el punto de vista social. En conclusión, la EPP presenta cinco características clave que la convierten en un marco útil en particular para apoyar la gestión de la tierra:

1) La EPP es un proyecto político, educativo y ético de investigación teórica comprometida.

2) Se inspira en la filosofía de la praxis de Gramsci, que describe la relación recíproca entre teoría y práctica, y reconoce el poder de las ideas como fuerza material para cambiar el mundo.

3) Reconoce el importante papel de los académicos dentro de una *comunidad de praxis* cuyos diversos actores comparten preocupaciones ambientales, colaboran, crean alianzas y coproducen conocimientos en pro de una acción eficaz.

4) Actúa en el ámbito de la investigación, la docencia y la prestación de servicio, vinculando cuidadosamente la investigación para satisfacer las necesidades de los socios comunitarios y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos

académicos, haciendo uso de métodos pedagógicos críticos que reconocen a los estudiantes como un actor crucial para el cambio social.

5) Está comprometida con la descolonización de la producción de conocimiento y, por tanto, pretende emplear metodologías de investigación-acción participativa y de mapeo utilizadas de forma crítica y reflexiva, prestando atención permanente a la ética de la articulación pública.

Lograr que la perspectiva de la ecología política sea accesible a un público más amplio, formar estudiantes para desarrollar una investigación comprometida y teóricamente informada, y apoyar a diversos grupos marginados, organizaciones y movimientos sociales en la creación de alianzas es el núcleo de la ecología política pública, esencial para una gestión integrada y ética de la tierra. No exige menos la gravedad de nuestra condición política, ecológica y económica.

Referencias

Anderson, P. (1976). The antinomies of Antonio Gramsci. *New Left Review*, *I*(100), 5-78.

Anderson, T. y D. Leal. (2001). *Free market environmentalism*. Palgrave.

Asher, K. (2014). The doers and the done for: interrogating the subjects and objects of engaged political ecology. *acme: An International E-Journal for Critical Geographies*, *13*(4), 489-496.

Bakker, K. (2007). The "commons" versus the "commodity": alter-globalization, anti-privatization and the human right to water in the global south. *Antipode*, *39*(3), 430-455.

Barnosky, A. D., N. Matzke, S. Tomiya, G. O. Wogan, B. Swartz, T. B. Quental, C. Marshall, J. L. McGuire, E. L. Lindsey, K. C. Maguire y B. Mersey. (2011). Has the Earth's sixth mass extinction already arrived? *Nature*, *471*(7336), 51-57.

Batterbury, S. P. J. (2016). Ecología política: relevancia, activismo y posibilidades de cambio. *Ecología Política*, *50*, 45-54.

Bebbington, A. J. (2014). The endogenous scholar: porous boundaries and travelling ideas in development. *Third World Quarterly*, *35*(3), 520-523.

Bebbington, A. J. (2015). At the boundaries of *la política*: political ecology, policy networks and moments of government. En T. G. Perreault, J. Bridge y J. McCarthy (eds.), *Routledge handbook of political ecology* (198-208). Routledge.

Berkes, F. (2012). *Sacred ecology*. Routledge.

Berry, S. (1993). *No condition is permanent: the social dynamics of agrarian change in sub-Saharan Africa*. University of Wisconsin Press.

Blaikie, P. M. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries*. Longman.

Blaikie, P. M. (1999). A review of political ecology. *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, *43*(1), 131-147.

Blaikie, P. M. (2008). Epilogue: towards a future for political ecology that works. *Geoforum*, *39*(2), 765-772.

Blaikie, P. M. (2012). Should some political ecology be useful? The inaugural lecture for the Cultural and Political Ecology Specialty Group, Annual Meeting of the Association of American Geographers, April 2010. *Geoforum*, *43*(2), 231-239.

Blaikie, P. M. y H. C. Brookfield. (1987). *Land degradation and society*. Longman.

Blomley, N. K. (2008). Activism and the academy. En H. Bauder y S. Engel-Di Mauro (eds.), *Critical geographies: a collection of readings* (28-32). Praxis (e)Press.

Borg, C., J. A. Buttigieg y P. Mayo (eds.). (2002). *Gramsci and education*. Rowman and Littlefield.

Bridge, G., J. McCarthy y T. Perreault. (2015). Editor's introduction. En T. Perreault, G. Bridge y an J. McCarthy (eds.), *Routledge handbook of political ecology* (3-18). Routledge.

Bryan, J. (2015). Participatory mapping. En T. Perreault, G. Bridge y J. McCarthy (eds.), *Routledge handbook of political ecology* (249-262). Routledge.

Bryant, R. L. (1991). Putting politics first: the political ecology of sustainable development. *Global Ecology and Biogeography Letters*, *1*(6), 164-166.

Cahill, C. (2007). The personal is political: developing new subjectivities through participatory action research. *Gender, Place and Culture*, *14*(3), 267-292.

Carroll, W. K. y R. A. Hackett. (2006). Democratic media activism through the lens of social movement theory. *Media, Culture and Society*, *28*(1), 83-104.

Castree, N. (1999). Out there? In here? Domesticating critical geography. *Area*, *31*(1), 81-86.

Castree, N. (2006). Geography's new public intellectuals? *Antipode*, *38*(2), 396-412.

Castree, N. (2013). The struggle over geography: prospects for advancing public pedagogy. *Dialogues in Human Geography*, *3*(2), 163-166.

Castree, N. (2014). The Anthropocene and geography I: the back story. *Geography Compass*, *8*(7), 436-449.

Chapin III, F. S., M. E. Power, S. T. A. Pickett, A. Freitag, J. A. Reynolds, R. B. Jackson, D. M. Lodge, C. Duke, S. L. Collins, A. G. Power y A. Bartuska. (2011). Earth stewardship: science for action to sustain the human-earth system. *Ecosphere*, *2*(8), art89.

Chatterton, P. (2006). "Give up activism" and change the world in unknown ways: or, learning to walk with others on uncommon ground. *Antipode*, *38*(2), 259-281.

Chisholm, M. (1971). Geography and the question of "relevance". *Area*, *3*(2), 65-68.

Clarke-Sather A., B. Crow-Miller, J. M. Banister, K. Anh Thomas, E. S. Norman y S. R. Stephenson. (2017). The shifting geopolitics of water in the Anthropocene. *Geopolitics*, *22*(2), 332-359.

Costanza, R. (1992). *Ecological economics: the science and management of sustainability*. Columbia University Press.

Cox, A. (2005). What are communities of practice? A comparative review of four seminal works. *Journal of Information Science*, *31*(6), 527-540.

Crutzen, P. J. (2002a). Geology of mankind. *Nature*, *415*(68-67, 23.

Crutzen, P. J. (2002b). The "anthropocene". *Journal de Physique IV*, *12*(10), 1-5.

Crutzen, P. J. y E. F. Stoermer. (2000). The Anthropocene. *IGBP Newsletter*, *41*, 7-18.

Daniel, J. (2012). Making sense of moocs: musings in a maze of myth, paradox and possibility. *Journal of Interactive Media in Education*, *2012*(3), artículo 18.

Daniel Z. Sui y Michael F. Goodchild (2011). *The convergence of GIS and social media: Challenges for GIScience*. International Journal of Geographical Information Science, 25(11), 1737–1748.

Derickson, K. D. y P. Routledge. (2015). Resourcing scholar-activism: collaboration, transformation, and the production of knowledge. *The Professional Geographer*, *67*(1), 1-7.

Dwyer, M. B. y I. G. Baird. (2014). Principled engagement: political ecologists and their interactions outside the academy introduction to a set of short interventions. *acme: An International Journal for Critical Geographies*, *13*(4), 473-477.

Ebben, M. y J. S. Murphy. (2014). Unpacking mooc scholarly discourse: a review of nascent mooc scholarship. *Learning, Media and Technology*, *39*(3), 328-345.

EJ Atlas. (2016). EJAtlas: mapping environmental justice. *Environmental Justice Atlas*. Institut De Ciència I Tecnologia Ambientals - Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA - UAB). http://ejatlas.org

Elmhirst, R. (2011). Introducing new feminist political ecologies. *Geoforum*, *42*(2), 129-132.

Elwood, S. (2006). Critical issues in participatory gis: deconstructions, reconstructions, and new research directions. *Transactions in gis*, *10*(5), 693-708.

Elwood, S. (2008). Volunteered geographic information: future research directions motivated by critical, participatory, and feminist gis. *GeoJournal*, *72*(3-4), 173-183.

Escobar, A. (1996). Construction nature: elements for a post-structuralist political ecology. En R. Peet y M. J. Watts (eds.). *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge.

Escobar, A. (1998). Whose knowledge, whose nature? Biodiversity, conservation, and the political ecology of social movements. *Journal of Political Ecology*, *5*(1), 53-82.

Forsyth, T. J. (2008). Political ecology and the epistemology of social justice. *Geoforum*, *39*(2), 756-764.

Fortmann, L. (1996). Gendered knowledge: rights and space in two Zimbabwe villages. En D. E. Rocheleau, B. Thomas-Slayter y E. Wangari (eds.), *Feminist political ecology: global issues and local experience* (211-223). Routledge.

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, *25/26*, 56-80.

Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury Publishing. [Original de 1970].

Fuller, D. (2008). Public geographies: taking stock. *Progress in Human Geography*, *32*(6), 834-844.

Fuller, D. y R. Kitchin. (2004). *Radical theory/critical praxis: making a difference beyond the academy*. Praxis EPress.

Gibson-Graham, J. K. y G. Roelvink. (2010). An economic ethics for the Anthropocene. *Antipode*, *41*(s1), 320- 346.

Gramsci, A., (2012). *Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci* (Q. Hoare y G. Nowell-Smith, eds.). International Publishers. [Originales, 1929-1935].

Graham, M., S. Hale y M. Stephens. (2012). Featured graphic: digital divide: the geography of internet access. *Environment and Planning A*, *44*(5), 1009-1010.

Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.

Hale, C. R. (2008). *Engaging contradictions: theory, politics, and methods of activist scholarship*. University of California Press.

Hall, S. (1986). Gramsci's relevance for the study of race and ethnicity. *Journal of Communication Inquiry*, *10*(5), 5-27.

Haraway, D. (2015). Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: making kin. *Environmental Humanities*, *6*, 159-165.

Hart, G. (2001). Progress reports: development critiques in the 1990s: *culs de sac* and promising paths. *Progress in Human Geography*, *25*(4), 649-658.

Hart, G. (2009). Developments after the meltdown. *Antipode*, *41*(s1), 117-141.

Harvey, D. (1974). What kind of geography for what kind of public policy? *Transactions of the Institute of British Geographers*, *63*, 18-24.

Harvey, D. (2001). *Spaces of capital: towards a critical geography*. Edinburgh University Press / Routledge.

Hecht, S. B. (1985). Environment, development and politics: capital accumulation and the livestock sector in eastern Amazonia. *World Development*, *13*(6), 663-684.

Heyman, R. (2000). Research, pedagogy, and instrumental geography. *Antipode*, *32*(3), 292-307.

Heynen, N., J. McCarthy, S. Prudham y P. Robbins (eds.). (2007). *Neoliberal environments: false promises and unnatural consequences*. Routledge.

Heynen, N. y L. Van Sant. (2015). Political ecologies of activism and direct action politics. En T. G. Perreault y J. McCarthy (eds.), *Routledge handbook of political ecology* (pp. 169-178). Routledge.

Hooks, B. (2014). *Teaching to transgress*. Routledge.

Jarosz, L. (2004). Political ecology as ethical practice. *Political Geography*, *23*(7), 917-927.

Jarosz, L. y K. Johnson-Bogart. (1996). New concepts of the relationship between college and community: the potential of service learning. *College Teaching*, *44*(3), 83-88.

Joseph, M. (2002). *Against the romance of community*. University of Minnesota Press.

Juris, J. S. (2012). Reflections on #Occupy everywhere: social media, public space, and emerging logics of aggregation. *American Ethnologist*, *39*(2), 259-279.

Karriem, A. (2009). *The rise and transformation of the Brazilian landless movement into a counter-hegemonic political actor: A Gramscian analysis.* Geoforum, 40(3), 316–325.

Kindon, S., M. Kesby y R. Pain. (2009). Participatory action research. En R. Kitchin y N. Thrift (eds.), *International encyclopedia of human geography* (pp. 90-95). Elsevier.

Kingsford, R. T., J. E. Watson, C. J. Lundquist, O. Venter, L. Hughes, E. L. Johnston, J. Atherton, M. Gawel, D. A. Keith, B. G. Mackey y C. Morley. (2009). Major conservation policy issues for biodiversity in Oceania. *Conservation Biology*, *23*(4), 834-840.

Kitchin, R. M. y P. J. Hubbard. (1999). Research, action and "critical" geographies. *Area*, *31*(3), 195-198.

Kitchin, R., D. Linehan, C. O'Callaghan y P. Lawton. (2013). The creation and circulation of public geographies. *Dialogues in Human Geography*, *3*(1), 96-102.

Lave, R. (2014). Engaging within the academy: a call for critical physical geography. *acme: An International E-Journal for Critical Geographies*, *13*(4), 508-515.

Lave, J. y E. Wenger. (1991). *Situated learning: legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.

Leff, E. (2015). Political ecology. A Latin American perspective. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, *35*, 29-64.

Loftus, A. (2013). Gramsci, nature, and the philosophy of praxis. En M. Ekers, G. Hart y S. Kipfer (eds.). *Gramsci: space, nature, politics* (pp. 178-196). Wiley-Blackwell.

Loftus, A. (2015). Political ecology as praxis. En T. Perreault, G. Bridge y J. McCarthy (eds.), *Routledge handbook of political ecology* (pp. 179-187). Routledge.

Lubchenco, J. (1998). Entering the century of the environment: a new social contract for science. *Science*, *279*(5350), 491-497.

Malm, A. y A. Hornborg. (2014). The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative. *The Anthropocene Review*, *1*(1), 62-69.

Mann, G. (2009). Should political ecology be marxist? A case for Gramsci's historical materialism. *Geoforum*, *40*(3), 335-344.

Martin, R. (2001). Geography and public policy: the case of the missing agenda. *Progress in Human Geography*, *25*(2), 189-210.

Martin, R. y P. Sunley. (2010). The new economic geography and policy relevance. *Journal of Economic Geography*, *11*(2), 357-369.

Massey, D. (2002). Geography, policy and politics: a response to Dorling and Shaw. *Progress in Human Geography*, *26*(5), 645-646.

McCarthy, J. (2005). Commons as counterhegemonic projects. *Capitalism Nature Socialism*, *16*(1), 9-24.

McGlade, C. y P. Ekins. (2015). The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C. *Nature*, *517*(7533), 187-190.

Mitchell, D. (2008). Confessions of a desk-bound radical. *Antipode*, *40*(3), 448-454.

Mollett, S. y C. Faria. (2013). Messing with gender in feminist political ecology. *Geoforum*, *45*, 116-125.

Monasta, A. (2002). Antonio Gramsci: the message and the images. En C. Borg, J. A. Buttigieg y P. Mayo (eds.), *Gramsci and education* (pp. 67-87). Rowman and Littlefield.

Moore, D. S. (1993). Contesting terrain in Zimbabwe's eastern highlands: political ecology, ethnography, and peasant resource struggles. *Economic Geography*, *69*(4), 380-401.

Moore, D. S. (2005). *Suffering for territory: race, place, and power in Zimbabwe*. Duke University Press.

Moore, J. W. (2015). *Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital*. Verso.

Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, part I: On the nature and origins of our ecological crisis. *The Journal of Peasant Studies*, *44*(3), 594-630.

Murphy, A. B. (2006). Enhancing geography's role in public debate. *Annals of the Association of American Geographers*, *96*(1), 1-13.

Nietschmann, B. (1995). Defending the Miskito Reefs with maps and gps: mapping with sail, scuba, and satellite. *Cultural Survival Quarterly*, *18*(4), 34-37.

Ogden, L., N. Heynen, U. Oslender, P. West, K. A. Kassam y P. Robbins. (2013). Global assemblages, resilience, and Earth stewardship in the Anthropocene. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *11*(7), 341-347.

Oglesby, E. (2006). Research collaboration from a geographer's perspective. *Latin American Studies Association Forum*, *37*(4), 19-21.

Osborne, T. (2015). Tradeoffs in carbon commodification: a political ecology of common property forest governance. *Geoforum*, *67*, 64-77.

Pain, R., M. Kesby y K. Askins. (2011). Geographies of impact: power, participation and potential. *Area*, *3*(2), 183-188.

Pain, R., M. Finn, R. Bouveng y G. Ngobe. (2013). Productive tensions—engaging geography students in participatory action research with communities. *Journal of Geography in Higher Education*, *37*(1), 28-43.

Paulson, S., L. L. Gezon y M. J. Watts. (2003). Locating the political in political ecology: an introduction. *Human Organization*, *62*(3), 205-217.

Peck, J. (1999). Editorial: grey geography? *Transactions of the Institute of British Geographers*, *24*(2), 131-135.

Peet, R., P. Robbins y M. J. Watts (eds.). (2010). *Global political ecology*. Routledge.

Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: resource control and resistance in Java*. University of California Press.

Peet, R. y M. J. Watts (eds.). (1996). *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge.

Peluso, N. L. (1995). Whose woods are these? Counter-mapping forest territories in Kalimantan, Indonesia. *Antipode*, *27*(4), 383-406.

Perkins, H. A. (2011). Gramsci in green: neoliberal hegemony through urban forestry and the potential for a political ecology of praxis. *Geoforum*, *42*(5), 558-566.

Peterson, T. H. (2009). Engaged scholarship: reflections and research on the pedagogy of social change. *Teaching in Higher Education*, *14*(5), 541-552.

Petrina, S. (2000). The political ecology of design and technology education: an inquiry into methods. *International Journal of Technology and Design Education*, *10*(3), 207-237.

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: the political and economic origins of our time*. Beacon Press.

Power, M. E. y F. S. Chapin III. (2009). Planetary stewardship. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *7*(8), 399-399.

Pulido, L. (2008). faqs: frequently asked questions on being a scholar/activist. En C. Hale (ed.). *Engaging contradictions: theory, politics and methods of activist scholarship* (341-36). University of California Press.

Rangan, H. (2017). Are social enterprises a radical planning challenge to neoliberal development? En H. Rangan, M. K. Ng, L. Porter y J. Chase (eds.), *Insurgencies and revolutions: reflections on John Friedmann's contributions to planning theory and practice* (95-104). Routledge.

Robbins, P. (2012). *Political ecology: a critical introduction*. Blackwell.

Robinson, A. C., J. Kerski, E. C. Long, H. Luo, D. DiBiase y A. Lee. (2015). Maps and the geospatial revolution: teaching a massive open online course (mooc) in geography. *Journal of Geography in Higher Education*, *39*(1), 65-82.

Rocheleau, D. E., B. Thomas-Slayter y E. Wangari (eds.). (1996). *Feminist political ecology: global issues and local experience*. Routledge.

Rocheleau, D. E. (2005). Maps as power tools: locating communities in space or situating people and ecologies in place. En P. J. Brosius, A. L. Tsing y C. Zerner (eds.), *Communities and conservation: histories and politics of community-based natural resource management* (327-362). Altamira.

Rocheleau, D. E. (2008). Political ecology in the key of policy: from chains of explanation to webs of relation. *Geoforum*, *39*(2), 716-727.

Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, Snyder, P. K., R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen y J. Foley. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity, *Ecology and Society*, *14*(2), 32.

Rozzi, R., F. S. Chapin III, J. B. Callicott, S. T. Pickett, M. E. Power, J. J. Armesto y R. H. May Jr. (eds.). (2015). *Earth stewardship: linking ecology and ethics in theory and practice*. Springer.

Said, E. (1978). *Orientalism*. Pantheon.

Sayre, N. F., R. R. McAllister, B. T. Bestelmeyer, M. Moritz y M. D. Turner. (2013). Earth stewardship of rangelands: coping with ecological, economic, and political marginality. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *11*(7), 348-354.

Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples*. Zed.

Staeheli, L. A. y D. Mitchell. (2005). The complex politics of relevance in geography. *Annals of the Association of American Geographers*, *95*(2), 357-372.

Steffen, W., P. J. Crutzen y J. R. McNeill. (2007). The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature. *ambio: a Journal of the Human Environment*, *36*(8), 614-621.

Steffen, W., Å Persson, L. Deutsch, J. Zalasiewicz, M. Williams, K. Richardson, C. Crumley, P. Crutzen, C. Folke, L. Gordon y M. Molina. (2011). The Anthropocene: from global change to planetary stewardship. *Ambio*, *40*(7), 739-761.

Sundberg, J. (2014). Decolonizing posthumanist geographies. *Cultural Geographies*, *21*(1), 33-47.

Tandon, R. (1988). Social transformation and participatory research. *Convergence*, *21*(2-3), 5-18.

Temper, L., D. del Bene y J. Martínez-Alier. (2015). Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. *Journal of Political Ecology*, *22*, 255-278.

Temper, L. y D. Del Bene. (2016). Transforming knowledge creation for environmental and epistemic justice. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *20*, 41-49.

Thomas, P. D. (2009). *The gramscian moment: philosophy, hegemony and marxism*. Brill.

Turner, M. D. (2014). Political ecology and its engagements with conservation and development. *acme: An International Journal for Critical Geographies*, *13*(4), 478-488.

Valenzuela, S. (2013). Unpacking the use of social media for protest behavior: the roles of information, opinion expression, and activism. *American Behavioral Scientist*, *57*(7), 920-942.

Wainwright, J. (2010). On Gramsci's "conceptions of the world". *Transactions of the Institute of British Geographers*, *35*(4), 507-521.

Wainwright, J. (2012). *Geopiracy: Oaxaca, militant empiricism, and geographical thought*. Palgrave Macmillan.

Walker, P. A. (2006). Political ecology: where is the policy? *Progress in Human Geography 30*(3), 382-395.

Walker, P. A. (2007). Political ecology: where is the politics? *Progress in Human Geography*, *31*(3), 363-369.

Ward, K. (2006). Geography and public policy: towards public geographies. *Progress in Human Geography*, *30*(4), 495-503.

Ward, K. (2007). Geography and public policy: activist, participatory, and policy geographies. *Progress in Human Geography*, *31*(5), 695-705.

Watts, M. J. (1990). Review of" "Land degradation and society" by Piers Blaikie and Harold Brookfield, 1987. *Capitalism, Nature, Socialism*, *4*, 123-131.

Wenger, E. (1998). *Communities of practice: learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.

Whitmer, A., L. Ogden, J. Lawton, P. Sturner, P. M. Groffman, L. Schneider, D. Hart, B. Halpern, W. Schlesinger, S. Raciti y N. Bettez. (2010). The engaged university: providing a platform for research that transforms society. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *8*(6), 314-321.

Yeh, E. T. (2007). Tropes of indolence and the cultural politics of development in Lhasa, Tibet. *Annals of the Association of American Geographers*, *97*(3), 593-612.

Zalasiewicz, J., M. Williams, W. Steffen y P. Crutzen. (2010). The new world of the Anthropocene. *Environmental Science and Technology*, *44*(7), 2228–2231.

43. Explicar la vulnerabilidad diferencial ante el cambio climático: una revisión desde las ciencias sociales[1]

Kimberley Thomas, R. Dean Hardy, Heather Lazrus, Michael Mendez, Ben Orlove, Isabel Rivera-Collazo, J. Roberts Timmons, Marcy Rockman, Benjamin P. Warner y Robert Winthrop

Resumen: Los distintos efectos de los recientes fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo ejemplifican el impacto desigual del cambio climático en las poblaciones, incluso en regiones geográficas relativamente pequeñas. La variación en el grado de vulnerabilidad humana frente a los peligros ambientales es resultado de una serie de factores sociales, económicos, históricos y políticos que operan a escalas múltiples. Aunque la adaptación al cambio climático ha sido el objetivo central de las agendas políticas y de investigación, es importante preguntarse por qué algunas comunidades y pueblos están expuestos de manera desproporcionada a las amenazas climáticas y son afectados por ellas. Los casos y la síntesis que aquí presentamos se organizan en torno a cuatro temas clave (acceso a los recursos, gobernanza, cultura y conocimiento) que abordamos desde cuatro campos de las ciencias sociales (antropología cultural, arqueología, geografía humana y sociología). Los enfoques científico-sociales sobre la vulnerabilidad humana prestan atención a las causas profundas de las amenazas del cambio climático y a las razones por las cuales las personas se ven obligadas a adaptarse a ellas. Dado que la vulnerabilidad es un proceso multidimensional y no un estado inmutable, es muy probable que un enfoque social dinámico sobre la vulnerabilidad mejore los esfuerzos para planear la mitigación y la adaptación. Este artículo está categorizado bajo: vulnerabilidad y

1 Publicado originalmente en: Kimberley Thomas, R. Dean Hardy, Heather Lazruz *et al*., 2018, "Explaining differential vulnerability to climate change: a social sciences review", *Climate Change*, 10(2): e565. https://doi.org/10.1002/wcc.565

adaptación al cambio climático y enfoque sobre vulnerabilidad y adaptación basado en valores.

Palabras clave: acceso, cultura, gobernanza, conocimientos, vulnerabilidad.

Introducción

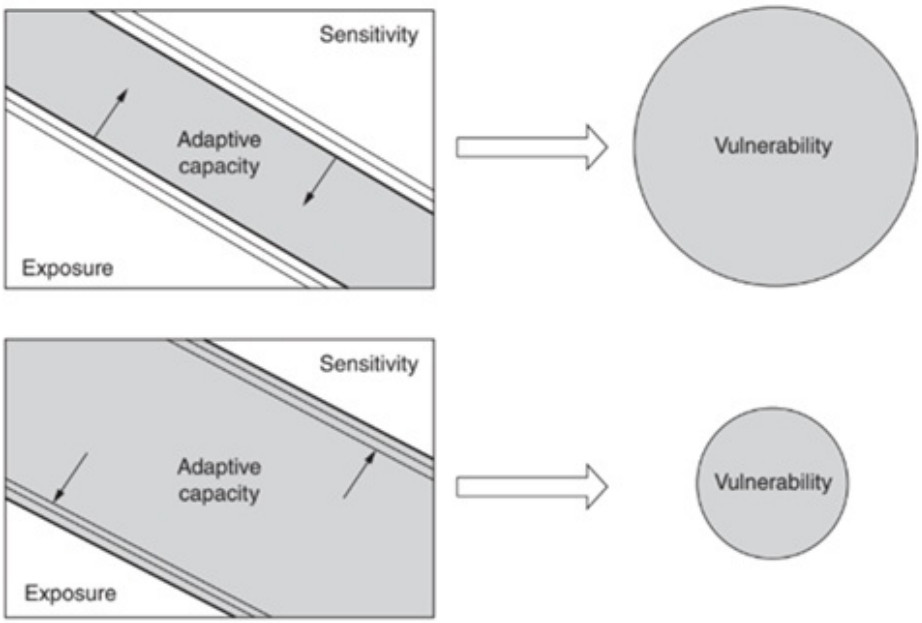
Cuando el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó su Primer Informe de Evaluación en 1990, la investigación sobre la vulnerabilidad al cambio climático se centraba sobre todo en la exposición a los impactos físicos en determinados sectores (por ejemplo, el agua, la agricultura), regiones (por ejemplo, los Andes, el sudeste asiático) y países, pero ofrecía poco análisis sobre los factores sociales de la vulnerabilidad al cambio climático o la distribución desigual del riesgo. Mucho ha cambiado desde entonces. En los años transcurridos desde entonces, un gran número de investigaciones en ciencias sociales han producido enfoques metodológicos, resultados empíricos y conocimientos teóricos que transformaron nuestra forma de pensar sobre la vulnerabilidad al cambio climático. A pesar de estos avances significativos, los enfoques científicos y técnicos sobre el cambio climático siguen dominando, desatendiendo buena parte de los factores sociales subyacentes de la vulnerabilidad. Debido a esto, destacamos aquí los enfoques científico-sociales de la vulnerabilidad al cambio climático, identificando y sintetizando sus contribuciones más destacadas en este campo.

Partimos del hecho de que, si bien nadie puede escapar a los impactos del cambio climático, algunos grupos sociales experimentan una pérdida mayor de recursos y mayores impactos sobre los medios de subsistencia y la identidad cultural que otros. Esta vulnerabilidad diferencial a niveles similares de cambios físicos es, sobre todo, resultado de factores sociales más que físicos. En esta revisión, nos centramos en estos aspectos cruciales pero a menudo olvidados de la vulnerabilidad. Nos preguntamos: ¿quién es más afectado por los impactos meteorológicos y climáticos, y por qué? Hacemos hincapié en los hallazgos de investigaciones sociales que indican que el acceso a los recursos y la capacidad de reducir la exposición a los

riesgos climáticos no se distribuyen de forma aleatoria en la sociedad, sino que impulsan una vulnerabilidad desigual en función de las diferencias sociales. La investigación en ciencias sociales mejora nuestra comprensión de las razones que explican la existencia de una vulnerabilidad desigual y ofrecen ideas útiles para minimizar antes de que los peligros se conviertan en catástrofes.

La vulnerabilidad, más que un estado inmutable, es un proceso multidimensional determinado por fuerzas sociales, políticas y económicas que interactúan en escalas locales hasta internacionales (Bohle *et al*., 1994; Ribot, 1995). En este texto, definimos la vulnerabilidad como una función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación (Figura 1) (Engle, 2011; Smit y Wandel, 2006). Reconocemos que son muchos los factores que influyen en la vulnerabilidad, identificamos cuatro temas generales útiles en particular para comprender los aspectos sociales de la vulnerabilidad, y estructuramos nuestro estudio en torno a ellos: acceso a los recursos, gobernanza, cultura y conocimientos. Elaboramos nuestro análisis desde múltiples perspectivas disciplinarias —antropología cultural, arqueología, geografía humana y sociología—. Los cuatro temas abarcan los principales marcos teóricos de cada una de estas disciplinas, pero no se circunscriben a una de ellas en exclusiva. En conjunto, estos enfoques proporcionan un marco interdisciplinario de ciencias sociales más completo para analizar y comprender la vulnerabilidad desigual por medio de las diferencias sociales. Cualquier esfuerzo por reducir la vulnerabilidad diferencial requiere entender por qué esta existe en primer lugar, un tema para el que estas disciplinas, con enfoques desarrollados para abordar cuestiones de poder y diferenciación social, son adecuadas en particular.

Figura 1. La vulnerabilidad es una función de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Una capacidad adaptativa baja, relativa a la exposición y a la sensibilidad, contribuye a una alta vulnerabilidad (arriba). En contraste, una capacidad adaptativa más alta ayuda a reducir los efectos de la exposición y sensibilidad, y a su vez reduce la vulnerabilidad (abajo).



(Reimpreso con permiso de Engle (2011). Copyright 2011 Elsevier.

Las intervenciones pueden reducir los daños y la mortalidad que los fenómenos meteorológicos extremos causan en grupos socialmente vulnerables. Estas intervenciones son mucho más eficaces cuando se considera la interacción de los cuatro aspectos que aborda este estudio —acceso a los recursos, gobernanza, cultura y conocimientos— con los tres componentes de la vulnerabilidad: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. Los casos de mala adaptación indican que también es necesario tener en cuenta los posibles

efectos negativos no deseados de las intervenciones de adaptación en personas y lugares situados más allá de la escala geográfica y temporal de un proyecto determinado. Prestar atención a estas cuestiones contribuirá al desarrollo de respuestas urgentes y estrategias de adaptación a largo plazo que minimicen la exposición y la sensibilidad, y que incrementen la capacidad de adaptación en un clima cambiante.

Cuatro puntos de la vulnerabilidad

En las siguientes cuatro secciones revisamos, en primer lugar, el acceso a los recursos, considerando cómo varía en la sociedad y cómo las disparidades provocan una susceptibilidad diferencial a los impactos climáticos. Los procesos de marginalización y privación de derechos tienen un papel importante en la producción del acceso desigual a los recursos. Al mismo tiempo, el cambio climático aumentará la exposición de las poblaciones a los peligros ambientales, al tiempo de exacerbar la desigualdad existente en la vulnerabilidad a partir de ejes de diferenciación social como raza, clase, etnia y género (Denton, 2002; Leichenko y Silva, 2014; Shepherd y Binita, 2015). El diseño y la aplicación de intervenciones eficaces para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación requieren considerar estas desigualdades en el contexto de cambios sociales continuos.

En segundo lugar, examinamos cómo la gobernanza afecta la vulnerabilidad al cambio climático: cómo los Gobiernos locales, las empresas privadas y la sociedad civil planifican y gestionan los riesgos del cambio climático. La representación y el empoderamiento son fundamentales para comprender la existencia de diferencias tan marcadas en la vulnerabilidad de distintos grupos sociales. Las diferencias de poder determinan quién se beneficia de las políticas gubernamentales y quién puede verse privado de sus derechos (Watts y Bohle, 1993). Muchos de los enfoques útiles para abordar la vulnerabilidad se basan en la gobernanza multinivel y en el desarrollo de beneficios colaterales para diversos grupos. Conectar la ciencia experta con las organizaciones locales por medio de redes de conocimiento aumenta tanto el intercambio de conocimientos entre el Gobierno y las comunidades, como los beneficios vinculados a ello como la confianza y la participación de los interesados (Bidwell *et al*., 2013; Phadke *et al*., 2016; Tschakert y Dietrich, 2009).

En tercer lugar, abordamos el papel de la cultura en la configuración de la vulnerabilidad. La cultura enmarca la forma en que los individuos perciben y explican su entorno y define quién es susceptible y está expuesto al cambio ambiental y cómo experimenta esta situación. Al influir en las percepciones del riesgo, la cultura también afecta a la capacidad de adaptación de las personas afectadas y determina la forma en que se evalúan las cuestiones relacionadas con la equidad y la justicia ambiental. Dado que los efectos del cambio climático se experimentan allí donde vive la gente, muchos aspectos de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación dependen del contexto (Crate y Nuttall, 2009). Las comunidades han desarrollado formas complejas de adaptarse a los riesgos climáticos, incluyendo sólidos acervos de conocimientos y prácticas situadas. Reconocer estas prácticas locales de adaptación ayudará a las comunidades a evitar que el próximo peligro se convierta en desastre.

En cuarto lugar, examinamos la naturaleza multidimensional del conocimiento y la información sobre el riesgo climático. Intentamos ir más allá del modelo de déficit de conocimientos porque implica que las instancias de gestión de emergencias y de riesgos climáticos solo necesitan compartir más información presentando, por ejemplo, hallazgos científicos sobre las amenazas y peligros relacionados con el cambio climático. Por el contrario, insistimos en que la información es necesaria pero no suficiente para reducir la vulnerabilidad. Exploramos diferentes tipos de conocimiento e información que afectan a la vulnerabilidad, argumentando que incluir diversas formas de conocimiento puede mejorar la planeación de la mitigación y la adaptación (McNeeley *et al*., 2017). Destacamos ejemplos que muestran la importancia de las redes sociales y las organizaciones fronterizas para facilitar la creación y el intercambio bidireccional de conocimientos.

Acceso a los recursos

Los efectos del cambio climático se presentan en un paisaje social ya de por sí complejo, poblado por grupos con diferente acceso a los recursos (Kasperson y Kasperson, 2001). El acceso a los recursos —o la capacidad de obtener beneficios de los recursos naturales y humanos (Ribot y Peluso, 2003)— influye en la vulnerabilidad incrementando o reduciendo la exposición, la sensibilidad

y la capacidad de adaptación (Figura 1). Los recursos relevantes comprenden bienes tangibles e intangibles, privados y públicos. Entre ellos se incluyen el capital privado, activos líquidos, sistemas de alerta de desastres, respuesta de emergencia, alojamiento alternativo, seguros, almacenes de alimentos, apoyo a la migración, infraestructura duradera, transporte y redes de información y comunicación (por ejemplo, Cinner *et al*., 2018). Sin embargo, la disponibilidad de estos recursos en cualquier lugar no significa necesariamente que las personas tengan acceso a ellos o que puedan ser utilizados para reducir la vulnerabilidad (Sen, 1984). El acceso a estos recursos implica complicadas relaciones sociales y estructuras de poder, muchas de las cuales las poblaciones marginadas y pobres luchan por sortear (Watts, 1983).

Las desigualdades en el acceso a los recursos pueden observarse entre regiones, incluso en los países más ricos, y entre comunidades y barrios de una misma ciudad (Shearer, 2012a). En este contexto, un peligro como un huracán o una sequía solo se convierte en catástrofes cuando ciertos grupos carecen de la capacidad de adaptación necesaria para protegerse de él. En otras palabras, los desastres "naturales" son en realidad desastres humanos (Gaillard *et al*., 2014; O'Keefe *et al*., 1976; Wisner, 2001). Cuando la supertormenta Sandy azotó Nueva York y Nueva Jersey en 2012, murieron más de cien personas (Kunz *et al*., 2013). Estas muertes se concentraron entre los ancianos, en parte porque carecían de acceso a asistencia sanitaria y transporte (Kunz *et al*., 2013). En comparación, el huracán Katrina mató a unas 1.800 personas en las zonas costeras relativamente empobrecidas de Luisiana y Misisipi. Aquí, la mayoría de las víctimas también eran ancianos, pero en Nueva Orleans buena parte de ellas también eran pobres y negros, especialmente en el Lower Ninth Ward, cerca de donde se rompieron los diques (Brunkard *et al*., Namulanda y Ratard 2008; Diakakis 2015; Jonkman *et al*., Maaskant, 2009). El huracán Katrina solo se convirtió en una catástrofe porque las infraestructuras abandonadas fallaron, la pobreza y la segregación están presentes en Nueva Orleans y muchas personas carecían de los recursos necesarios para prepararse, evitar y recuperarse de la tormenta. Comparar la devastación causada por el huracán María en Puerto Rico con la causada por el huracán Harvey en Texas en 2017 proporciona otro ejemplo descarnado de la naturaleza social de los desastres (Weiss *et al*., 2018). Puerto Rico quedó

devastado y continuó así varios meses después, mientras que las comunidades en Texas pudieron recuperarse mucho más rápidamente.

Desigualdades similares existen en la capacidad de adaptación: algunas comunidades se recuperan más rápido que otras tras huracanes o inundaciones (Logan *et al*., 2016). Reconocer y comprender estas diferencias exige que los científicos y los responsables políticos entiendan mejor lo que implica el acceso a los recursos y la capacidad de adaptación.

El punto crucial es comprender que las diferencias no reflejan una falta de recursos, sino más bien una distribución desigual de los recursos disponibles (Gaillard, 2010; Ribot, 1995; Sen, 1984). La incapacidad de las personas y comunidades para asegurar el acceso a los recursos y la capacidad de adaptación a los impactos relacionados con el clima depende directamente de la imposibilidad de controlar su vida cotidiana (Gaillard, 2010), y elegir el lugar donde viven y cómo y dónde aseguran su sustento (Blaikie, 1985). Así, los impactos relacionados con el clima y el sufrimiento padecido por segmentos de la población "reflejan un fracaso del desarrollo donde las causas profundas de la vulnerabilidad se funden con los orígenes de otras crisis relacionadas con el desarrollo" (Gaillard, 2010: 222). Estos fracasos del desarrollo provienen de cuestiones relacionadas con diferentes jerarquías sociales basadas en la discriminación racial, de casta y de género; la pobreza y las diferencias de poder.

Raza, casta y género

Más allá de actos evidentes de discriminación racial, el racismo estructural produce disparidades raciales más sutiles en el desempeño educativo, los ingresos y la riqueza, al perpetuar el acceso desigual a los recursos (Bonilla-Silva, 1997; López, 2003; Omi y Winant, 2015; Shearer, 2012b). El racismo estructural, que implica "la totalidad de las relaciones y prácticas sociales que refuerzan el privilegio blanco" (Bonilla-Silva, 2013: 9), contribuye a aumentar la vulnerabilidad entre las poblaciones no blancas de Estados Unidos. En Estados Unidos, los hogares blancos ganaban 65% más ingresos y poseían una riqueza trece veces mayor en 2014 que los hogares afroamericanos (Pew Research Center, 2016), que tenían más probabilidades que los hogares blancos

de sufrir la ejecución hipotecaria de sus viviendas tras la recesión de 2009 (Rugh y Massey, 2010). Estas disparidades pueden dar lugar a una planificación inexacta de la adaptación que, en Estados Unidos, agrava aún más las desigualdades en el acceso a los recursos necesarios para adaptarse a un clima cambiante (Hardy *et al*., 2017). En la costa oriental de la bahía de Chesapeake, el aislamiento social y político de tres comunidades afroamericanas redujo su acceso a recursos importantes para adaptarse a las frecuentes inundaciones, así como su representación en la toma de decisiones gubernamentales (Miller y Paolisso, 2015). Los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad, por tanto, se ven favorecidos con la atención a las diferencias de raza, clase, género, etnia y otros ejes de diferencia social entre las poblaciones. En contextos no estadounidenses, procesos sociales similares pero específicos para cada región pueden resultar en una planificación de la adaptación poco equitativa (Graham *et al*., 2015; Sultana, 2017).

En varios países, las personas sufren discriminación social por grupos endogámos, hereditarios y jerárquicos conocidos como castas. Aunque estas categorías sociales no siempre son oficialmente reconocidas, tiene profundas implicaciones en la exposición de las personas a los impactos del clima, así como para el acceso a los alimentos, el agua, la tierra, la educación y los servicios gubernamentales, incluyendo la ayuda en caso de catástrofe (Mustafa *et al*., 2010; Ray-Bennett, 2009). En la India, cada vez es más claro que las castas son categorías flexibles, dinámicas y controvertidas. Sin embargo, un estudio realizado en Orissa reveló que las mujeres de casta superior podían hacer frente a múltiples desastres de forma más eficiente que aquellas de casta inferior, quienes carecían de una vivienda estable y de redes vecinales para amortiguar los efectos de las inundaciones, los ciclones y las sequías (Ray-Bennett, 2009). Estos estudios revelan cómo la casta, la clase, el género y otras categorías sociales se sobreponen para crear vulnerabilidades únicas solo discernibles mediante análisis de tipo interseccional (Bosher *et al*., 2007; Onta y Resurrección, 2011; Ray-Bennett, 2009; Sultana, 2014; 2017).

El género es un potente factor que explica la vulnerabilidad a los impactos relacionados con el clima. Factores como la falta de acceso y control sobre los recursos básicos y la falta de derechos amplifican la vulnerabilidad de

las mujeres y socavan su capacidad para hacer frente a los efectos de las catástrofes (Denton, 2002; Sultana, 2014). Un estudio realizado en la costa de Bangladesh examinó los efectos inmediatos del ciclón Aila en 2009, así como cambios más graduales y a más largo plazo, como trabajar en el campo con un calor cada vez más intenso, recuperar agua de pozos contaminados por el agua de mar y reparar infraestructuras dañadas por las inundaciones recurrentes provocadas por las mareas (Al Nahian *et al.*, 2013). Estas situaciones aumentaron las dificultades en las tareas diarias de adquisición de recursos para las mujeres, lo que a su vez provocó un aumento del hambre. También descubrieron que, debido a la restricción de los roles de género, las mujeres no podían asistir a cursos de formación de organizaciones no gubernamentales (ong) o actividades generadoras de ingresos sin el permiso de sus maridos (Al Nahian *et al.*, 2013). Quizá el ejemplo más llamativo de la extrema vulnerabilidad de las mujeres se da en los casos en los que no pueden evacuarse de la crecida de las aguas debido a restricciones religiosas y culturales que les impiden viajar sin acompañantes masculinos (Crate y Nuttall, 2009; Sultana, 2014). Por tanto, para abordar la vulnerabilidad, es necesario comprender y prestar atención al género y sus interacciones con la raza y la casta, pero también con la clase social.

La pobreza

Los pobres y las naciones empobrecidas suelen sufrir las mayores pérdidas por desastres relacionados con el clima (Roberts y Parks, 2006). La pobreza afecta al acceso a los recursos y, a su vez, la vulnerabilidad de formas complejas (Blaikie *et al.*, 1994; Leichenko y Silva, 2014; Peacock *et al.*, Gladwin 1997). La vulnerabilidad es determinada por las capacidades económicas, institucionales y políticas de las personas afectadas por los impactos del clima (Bohle *et al.*, 1994). Si el acceso a los recursos está limitado por los ingresos o la riqueza, la vulnerabilidad resulta entonces de la carencia de capacidad económica. Si los recursos simplemente no existen en el sitio donde habita un determinado grupo, la vulnerabilidad proviene de la falta de capacidad institucional de ese grupo. Por último, si el acceso a los recursos está limitado por procesos de explotación o apropiación de excedentes, debe considerarse que la

vulnerabilidad es el resultado de la ausencia de capacidad política para obtener o retener los recursos. En cada caso, el grupo marginado puede considerarse pobre, pero las soluciones para limitar o reducir la vulnerabilidad pueden ser muy diferentes.

Muchos grupos pueden enfrentar diferentes combinaciones de capacidades económicas, institucionales y políticas insuficientes. Por ejemplo, la preparación ante catástrofes suele implicar la elaboración de planes, el acopio de suministros, la contratación de seguros, la instalación de protecciones y la búsqueda de información. En muchos sitios, los hogares y comunidades tienen más dificultades para prepararse para las amenazas climáticas, pues carecen de los ingresos, el tiempo, las capacidades lingüísticas y los conocimientos necesarios sobre los recursos y cómo obtenerlos (Mileti, 1999). La vulnerabilidad de estos hogares refleja tanto un patrimonio limitado para prepararse ante los impactos del clima como una capacidad institucional restringida para garantizar la existencia de recursos útiles para una preparación efectiva ante catástrofes.

Un segundo ejemplo muestra por qué las alertas de catástrofes estándar suelen ser menos útiles en las comunidades pobres. Una serie de inundaciones y ciclones desastrosos en Bangladesh incitaron al Gobierno a transitar del énfasis en el socorro y la recuperación en caso de catástrofe hacia sistemas de alerta temprana y evacuación, lo que se tradujo en una reducción notable del número de víctimas mortales asociadas a este tipo de sucesos (Ribot, 2010). Sin embargo, Bose (2015: 5) señala que los beneficios de la protección no llegan necesariamente a quienes viven en los asentamientos informales de Dhaka, debido en parte a "la incapacidad de notificar a los residentes que carecen de derechos de propiedad o residencia, y a una impermanencia general de la comunidad". Estos hogares son vulnerables, pues carecen de capacidad institucional para garantizar su inclusión en las estrategias de alerta de catástrofes. Además, no pueden reclamar un estatus legal que legitime sus comunidades, lo que refleja su falta de capacidad política.

Un tercer ejemplo común de la relación entre pobreza y vulnerabilidad denota la importancia del entorno construido. Los lugares donde residen los pobres suelen ser menos resistentes a los impactos del tiempo y el cambio

climático. Zonas de habitación más baratas y menos cómodas, como llanuras aluviales y laderas inestables, suelen estar más expuestas a riesgos climáticos (Wisner, 2001). Los edificios pueden estar mal construidos, incrementa la susceptibilidad ante los impactos climáticos (Austin y Schill, 1994; Bolin, 1986; Greene, 1992; Hallegatte, 2012; Phillips, 1993). Así los pobres son vulnerables frente al cambio climático en sí mismo, pero amplían su vulnerabilidad, pues la recuperación es más difícil. Por ejemplo, tras el huracán Andrew, a pesar de que la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) —la principal agencia de atención a catástrofes en Estados Unidos— abrió centros de asistencia, las víctimas pobres sufrieron un impacto desproporcionado. Las personas pobres fueron afectadas de manera desproporcionada por la tormenta, pero además recibieron menos ayuda para la reubicación porque resultaba difícil conseguir transporte y guarderías, así como ausentarse del trabajo para presentar demandar atención (Dash *et al*., 1997). A la hora de recuperarse de catástrofes climáticas, los mayores retos que enfrentan los pobres suelen ser conseguir una vivienda segura y reubicarse (Fothergill y Peek, 2004). Esto refleja la falta de capacidad económica, institucional y política de los hogares pobres, capacidades todas vinculadas al poder.

Diferenciales en el poder

La capacidad de influir o coaccionar a distintos grupos —el poder social— proviene de jerarquías sociales que producen desigualdades en el acceso a los recursos y a la vez las reproduce, lo cual genera una vulnerabilidad diferencial entre las comunidades. De este modo, las diferencias de poder pueden conceptualizarse como la síntesis de los dos conjuntos de problemas descritos antes. La vulnerabilidad se produce no solo por la marginación o la pobreza de determinados grupos sociales, sino también mediante los procesos que perpetúan o amplían la marginación y la pobreza, incluyendo potencialmente los planes de adaptación (Anguelovski *et al*.. 2016; Atteridge y Remling, 2018; Warner y Kuzdas, 2016). Los grupos con mayor poder político tienen más probabilidades de conseguir financiamiento para planear, hacer frente y responder a los impactos del clima. La inequidad en la capacidad de adaptación puede incrementarse al permitir que "grupos

poderosos de personas localizados geográficamente minimicen las externalidades ambientales negativas y se apropien de las externalidades ambientales positivas en sitios concretos, con consecuencias socioambientales injustas " (Collins, 2010: 265; cf. Anguelovski *et al*., 2016; Shi *et al*., 2016).

En el caso de los impactos costeros del cambio climático, tales desigualdades se incrementan en el ámbito financiero por el gasto desigual de los fondos de adaptación, y físicamente mediante la construcción de diques u otras protecciones costeras que literalmente desplazan el problema hacia la carretera o al otro lado del río (Adger *et al*., 2005). En muchos casos de amenazas costeras, la construcción de diques, canales de inundación y otras "infraestructuras grises" puede proteger la tierra y la vida de las poblaciones afectadas, pero, al mismo tiempo, desviar el riesgo hacia otros lugares (Atteridge y Remling, 2018). En el sudeste asiático, las estrategias de gestión del riesgo de inundaciones que dependen en gran medida de medidas estructurales que priorizan la protección de propiedades de alto valor y los usos de suelo que benefician a elites locales frente a los servicios ecológicos de la pesca productiva, los humedales y las llanuras aluviales que benefician sobre todo a los hogares rurales de agricultores y pescadores (Lebel y Sinh, 2007). Un estudio reciente en ocho ciudades de todo el mundo reveló dos formas principales en que los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad podrían aumentar la desigualdad (Anguelovski *et al*., 2016). En primer lugar, "las inversiones en infraestructura, la normatividad sobre el uso del suelo o las nuevas zonas protegidas afectan o desplazan desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos" (Anguelovski *et al*., 2016: 334). Un segundo conjunto de impactos provinieron de "planes para proteger zonas económicamente valiosas en lugar de barrios de bajos ingresos o de minorías, entienden la adaptación como una responsabilidad privada en lugar de un bien público, o no logran involucrar a las comunidades afectadas en el proceso" (2016: 334).

Más allá de los entornos urbanos heterogéneos, la dicotomía tradicional entre "rural" y "urbano" no representa de manera adecuada la diversidad de relaciones entre las personas y los paisajes que, en gran medida, afectan a la vulnerabilidad (Lerner y Eakin, 2011). En zonas de alta densidad poblacional, aun cuando la mayoría de las personas pueden verse afectadas de manera similar por la exposición a cierto impacto climático local,

varios espacios de actividad definidos como "una área geográfica donde las personas se mueven durante sus actividades diarias" (Ren, 2016; Kwan, 2013; Kwan y Schwanen, 2016) —serán afectados de manera diferencial—. Estas discrepancias fueron evidentes, por ejemplo, en los efectos de las inundaciones de Maharashtra de 2005 en Bombay (India) y el huracán Sandy (Chatterjee, 2010; Schmeltz *et al.*, 2013).

En zonas de baja densidad de población, los medios de vida de las personas dedicadas a la agricultura, la silvicultura y la pesca dependen en forma directa del ambiente. Los impactos climáticos amenazan no solo su salud y seguridad, sino también su capacidad para ganarse la vida (Berkes, 2007; Watts *et al.*, 2015). Los habitantes de estas áreas también pueden tener un menor acceso a la atención médica y a los recursos para enfrentar catástrofes que los habitantes de zonas con mayor densidad de población (Morrow, 1999). En zonas menos pobladas, la disminución de los recursos se asocia a la privatización de los servicios públicos y a un suministro limitado de servicios públicos, aunque estas tendencias pueden variar (Lobao *et al.*, 2014).

Ya sea en zonas de alta o baja densidad de población, los espacios de actividad diaria afectan la salud, la exposición a compuestos tóxicos del ambiente (Perchoux *et al.*, 2013), la accesibilidad a alimentos (Widener y Shannon, 2014) y la capacidad de desplazamiento tanto a distancias cortas (Faber, 2015) como largas (Silm y Ahas, 2014). Por tanto, los programas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático deben diseñarse para contextos sociales específicos (véanse los ejemplos de la Nación Navajo y los Apalaches meridionales, más adelante). Más investigación es necesaria para comprender qué combinación de capacidades, tanto de las que abordan los impactos específicos relacionados con el clima (capacidades específicas) como las que se refieren a los déficits estructurales que crean la vulnerabilidad (por ejemplo, la falta de ingresos, educación y poder político, esto es, la capacidad genérica), son necesarias en diferentes lugares (Lemos, Lo, Nelson, Eakin, y Bedran-Martins 2016). Para crear estas capacidades y abordar las cuestiones de poder, pobreza, raza, casta y género es necesario transformar las prácticas de gobernanza del cambio climático.

Gobernanza

Los procesos de gobernanza —la forma en que los Gobiernos y otras organizaciones abordan los problemas sociales— configuran y responden a la vulnerabilidad al cambio climático. El concepto de gobernanza va mucho más allá de las instituciones gubernamentales formales y comprende "las relaciones entre el Gobierno y la sociedad, incluidos los medios a través de los cuales los actores privados, los mercados y las redes de interés influyen en las decisiones políticas" (Chaffin *et al*., 2016: 401). El cambio climático plantea retos tanto agudos como crónicos para una gobernanza eficaz, pues exige respuestas tanto a fenómenos "puntuales" repentinos, como el ciclón Nargis, que mató a más de 130.000 personas en Myanmar en 2008, como a fenómenos donde la "presión" es gradual, como el incremento del nivel del mar (Collins *et al*., 2011). Es difícil reconocer claramente los diferentes estilos de gobernanza y las instituciones necesarias para situaciones tan dispares.

La representación es una cuestión fundamental. La representación es la capacidad de distintos grupos para participar en procesos políticos que establecen procedimientos e influyen en los resultados, lo cual es crucial para la seguridad humana frente a los factores de estrés climático. A partir del trabajo de Sen (1984) sobre las capacidades y el origen del hambre, Watts y Bohle describen un "espacio de vulnerabilidad" en la intersección del control sobre los recursos (como los alimentos) y los modelos de reproducción social basados en la clase y en los derechos. "Una reducción de la vulnerabilidad exige una promoción de los derechos [...] [lo que es] *prima facie* político", Watts y Bohle (1993: 49). La hambruna (al igual que los efectos devastadores de las catástrofes relacionadas con el clima) afecta a tres grupos de personas diferentes que se sobrelapan: los pobres de recursos, los carentes de poder y los explotados. Este mapa social de tipos de vulnerabilidad, argumentan, también "tiene su contrapartida geográfica o espacial", ya que diferentes regiones y partes del mundo se sitúan más arriba o más abajo en cada una de estas variables, Watts y Bohle (1993: 56). Esta perspectiva nos ayuda a observar cómo las limitaciones en la representación (gobernanza con poder sesgado para favorecer a determinados grupos) son fundamentales para crear

y mantener pautas de vulnerabilidad; por tanto, abordar la gobernanza es fundamental para reducir la vulnerabilidad.

Las ong pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Por ejemplo, las organizaciones que hablan por las poblaciones vulnerables pueden cuestionar las políticas gubernamentales sobre el cambio climático y acercarse a los pobres, mientras la colaboración entre los gobiernos y las ong locales pueden incrementar de manera significativa el éxito de una acción social. La mayor presencia de cuestiones climáticas en la agenda de Gobiernos locales está promoviendo nuevos tipos de asociaciones entre sectores. Por ejemplo, el cambio climático tiene impactos significativos en la salud (Watts *et al*., 2015), como el aumento en la incidencia del asma (Shea *et al*., 2008). A medida que se conocen mejor estas relaciones causales, los hospitales, las universidades y los departamentos de salud estatales se asocian con mayor frecuencia a organizaciones de acción social, sindicatos y grupos ecologistas para desarrollar programas que aborden la salud y otros aspectos del bienestar ambiental (Rudolph *et al*., 2015).

Los enfoques sólidos de adaptación desde el punto de vista científico y social involucran a las comunidades en todas las fases del proceso: identificación de problemas, diseño de respuestas, aplicación de medidas y evaluación de resultados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (cdc, por sus siglas en inglés) utilizan un modelo de investigación participativa basado en la comunidad, que se desarrolló para comprender y abordar los problemas de salud, y que podría adaptarse para la creación de resiliencia (Simonds *et al*., 2013). Otras instituciones han llevado a cabo numerosos programas, utilizando de forma similar el una interacción continua, en ámbitos como la gestión de desastres en Filipinas y la gestión del agua y los cultivos en Ghana (Allen, 2006; Tschakert, y Dietrich 2009). Como demuestran los casos que aquí analizamos, el establecimiento de relaciones fomenta la responsabilidad entre expertos y políticos y ayuda a superar las deficiencias de la toma de decisiones de arriba abajo.

Gobernanza pública y privada

La reducción de la vulnerabilidad es un objetivo necesario en la mayoría de las organizaciones, ya que intentan en su nombre y en el de las poblaciones a las que sirven, de evitar las amenazas de daño, reducirlos en caso de que se produzcan y de mejorar su respuesta a las amenazas. Las instituciones gubernamentales, las empresas privadas y las ong, trabajando por separado o de forma conjunta, realizan esfuerzos para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Sus actividades implican establecer prioridades de acción, asignar recursos y desarrollar y aplicar planes, así como desplegar intervenciones continuas para reducir la vulnerabilidad, que se deriva de múltiples factores en interacción. Pero muchas organizaciones asignan pocos o ningún recurso a reducir la vulnerabilidad, pues sus posibles beneficios futuros no pueden competir con las necesidades inmediatas y los objetivos a corto plazo. Estos factores plantean retos para el desarrollo y la aplicación de planes, que a menudo se ocupan de un subconjunto de las causas de vulnerabilidad (Weber, 1997).

Las acciones de adaptación al cambio climático varían desde esfuerzos autónomos locales hasta proyectos dirigidos por los Gobiernos. En cuanto a la gestión del riesgo de inundaciones, en muchas comunidades periurbanas, las asociaciones de propietarios y otros grupos locales son los responsables de mantener los estanques de retención de aguas pluviales y las instalaciones de infraestructura verde que reducen las inundaciones y protegen las vías fluviales locales. Con frecuencia, las asociaciones carecen de los fondos y conocimientos técnicos necesarios para gestionar estos elementos de la forma adecuada, lo que aumenta tanto la vulnerabilidad a los peligros hídricos como los riesgos para las comunidades situadas aguas abajo. Muchos grupos, desde municipios hasta complejas organizaciones sociales formadas por vecinos a lo largo de las costas, se han autorganizado para construir protecciones costeras como rompeolas, diques y revestimientos. Con independencia del grado de organización, la capacidad financiera y de toma de decisiones puede limitar el desarrollo de proyectos comunitarios (Allen, 2006). Por necesidad, las ciudades y las provincias pueden asumir la responsabilidad de financiar medidas de adaptación, como la realización

de mejoras costosas en las carreteras costeras amenazadas por la subida del nivel del mar (Moser, 2012; Ruppert y Deady, 2017).

Los retos de gobernanza son evidentes en muchos esfuerzos municipales para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, en especial con respecto a los peligros y los fenómenos extremos. Las ciudades suelen operar en plazos más largos que los de otras organizaciones porque los actores urbanos interesados están estrechamente vinculados a los funcionarios y también debido a que los Gobiernos municipales realizan importantes inversiones en proyectos de infraestructura a largo plazo. Los peligros y las catástrofes pueden impulsar a las ciudades a restar recursos de proyectos en curso y destinarlos a la reducción de la vulnerabilidad; las tendencias graduales, aunque asimismo graves, no suelen llamar la atención. En Chicago, una grave ola de calor en 1995 llevó a la ciudad a desarrollar programas de divulgación para poblaciones especialmente vulnerables, como los ancianos; tras la aplicación de los programas menos gente murió en las siguientes olas de calor (Klinenberg, 2002).

A pesar del ejemplo de Chicago, las ciudades tienden a invertir en infraestructuras visibles, tangibles y duras en lugar de impulsar medidas sutiles para la reducción de la vulnerabilidad, en un proceso que a menudo genera consecuencias imprevistas. Después de una gran inundación en 1962, Norfolk, Virginia, se construyó un gran dique en lugar de reducir la exposición de los residentes por medio de adquisiciones y seguros para alentar la reubicación lejos de las zonas bajas, que siguen siendo muy vulnerables a la subida del nivel del mar (National Research Council, 2004; Norfolk, Virginia, City of Norfolk, Virginia, 2004). Este es un ejemplo de la "paradoja del desarrollo seguro", en la que "el aumento de la seguridad induce un incremento en el desarrollo que conduce a un aumento de las pérdidas" (Kates *et al.*, 2006, 14653; Adger *et al.*, 2005).

Por tanto, la gobernanza de los riesgos climáticos puede fracasar a la hora de reducir la vulnerabilidad si los proyectos son muy limitados en la definición de la población, la zona geográfica, los problemas o la escala temporal de interés. Así pues, para hacer frente a los riesgos climáticos y otros problemas ambientales suele ser necesario actuar a gran escala en todo un ecosistema o

paisaje. A su vez, estas medidas exigen de la participación pública dentro de los países y entre ellos.

Participación de la sociedad civil

Además de las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil suele constituir una tercera dimensión de la gobernanza. Incorporar los esfuerzos de diversos grupos de la sociedad civil, desde clubes deportivos e iglesias hasta organizaciones de servicios sociales y movimientos de protesta, puede mejorar la capacidad de las comunidades para prepararse y responder a los fenómenos climáticos extremos. Un mayor compromiso público requiere que las personas comprendan que los riesgos climáticos son relevantes para sus propias vidas y desafíos. ¿Cómo se relacionan las olas de calor y las inundaciones, por ejemplo, con la mala salud y el aislamiento social? El desarrollo de la capacidad de adaptación de las comunidades requiere esfuerzos a escalas múltiples.

El abanico de instituciones e iniciativas de la sociedad civil implicadas en la creación de capacidad de adaptación incluye movimientos sociales de acción climática, como la Marcha del Pueblo por el Clima; organizaciones religiosas, como ActionAid, Islamic Aid e Interfaith Power and Light; redes nacionales e internacionales, como Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (antes Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales, ICLEI, siglas en inglés); la Red de Acción Climática y numerosos grupos indígenas. Entre estos últimos figuran el Institute for Tribal Environmental Professionals, la Indigenous Environmental Network y el Arctic Circumpolar Council, integrado por representantes de los esquimales inuit de Canadá, Groenlandia y Rusia.

La labor de los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad y las 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller son ejemplos importantes de transformaciones en la gobernanza para hacer frente a la vulnerabilidad. Gobiernos Locales por la Sostenibilidad nació como una organización sin ánimo de lucro para ayudar a las ciudades a reducir sus emisiones de CO_2, y ha crecido para ofrecer asistencia técnica a las ciudades en el desarrollo de planes de vulnerabilidad y adaptación, y promovido un "Pacto de Alcaldes" mundial para reducir

las emisiones y la vulnerabilidad (ICLEI, 2015). La Fundación Rockefeller puso en marcha su importante iniciativa 100 Ciudades Resilientes y estableció con ello una red para compartir conocimientos y experiencias, para lo cual apoyó la contratación de jefes de Resiliencia en cada una de ellas y la creación y puesta en marcha de planes de resiliencia. La iniciativa, junto con organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, que financian inversiones urbanas, ha tenido una gran influencia en la forma de concebir y abordar la vulnerabilidad climática en todo el mundo (Chu *et al*., 2016). Aunque los modos de participación e inclusión pública difieren de forma notable en función de las historias y los contextos locales, un estudio concluyó que "los procesos de planificación ampliamente inclusivos que convocan a una amplia variedad de actores e instituciones pueden contribuir a una mayor justicia procesal y, a resultados equitativos a corto plazo" (Chu *et al*., 2016: 387).

Los ejemplos de los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad y las 100 Ciudades Resilientes reflejan un enfoque altamente "multiescalar" para gobernar la cuestión de la vulnerabilidad al cambio climático y la resiliencia (Bulkeley y Betsill, 2005; Shi *et al*., 2016). Los Estados por sí solos ya no se consideran como la única solución para el problema; la gobernanza eficaz para reducir la vulnerabilidad al cambio climático requiere ahora de una serie de actores que incluyen a los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Entre las cuestiones importantes para los especialistas en ciencias sociales figuran las siguientes: ¿Cuáles son las bases de la participación en estos grupos y organizaciones? ¿Cómo influyen estas instituciones en la negociación, legislación y aplicación de planes de adaptación a distintas escalas? ¿Cuándo se convierte el clima en un problema asumido por los movimientos sociales existentes y cuándo crea nuevos movimientos sociales? ¿Cómo influye la concienciación sobre las cuestiones climáticas en el establecimiento de agendas y la formación de coaliciones (Caniglia *et al*., 2015; McCright y Dunlap, 2015)? Cada una de estas preguntas plantea cuestiones de justicia y equidad en la gobernanza climática, incluyendo la justicia procedimental y la obtención y distribución justa de los recursos para la adaptación (Ciplet *et al*., 2015; Grasso, 2010).

Cultura

La cultura —los significados compartidos por los miembros de un grupo social— es vital para comprender la vulnerabilidad al cambio climático. La experiencia humana de la naturaleza y el cambio ambiental está mediada por la cultura. "Los seres humanos ven la naturaleza a través de una pantalla de creencias, conocimientos y propósitos, y actúan en función de sus imágenes de la naturaleza, más que de la estructura real de la naturaleza" (Rappaport, 1979: 97). Esto se aplica con especial relevancia a la adaptación al cambio climático y la vulnerabilidad, ya que en la adaptación, "la identificación de los riesgos, las decisiones sobre las respuestas y las formas de llevarlo a cabo están mediados por la cultura" (Adger *et al*., 2013: 112).

Sin embargo, las "culturas" no son entidades distintas, como los planetas o las toronjas. Si las culturas son sistemas de significado, se trata de sistemas difusos y no claramente delimitados: evolucionan, se transforman y son en gran medida tácitos (Winthrop, 2002: 163). Mientras que las culturas solo existen en y mediante la vida social, los sistemas culturales carecen de una pertenencia definitiva. Los individuos participan en múltiples marcos culturales. Así, por ejemplo, la visión cultural que tienen de los cangrejos azules amenazados los pescadores de la bahía de Chesapeake, cuyo medio de vida depende de la pesca del cangrejo, coincide y difiere de la que tienen los científicos marinos que estudian el ecosistema de la bahía (Paolisso, 2002).

La cultura y la organización social determinan la vulnerabilidad al cambio climático en cuanto a quién y qué está expuesto y cómo es afectado. Cuando un huracán azota una comunidad pobre en un país en desarrollo, por ejemplo en la península mexicana de Yucatán, las mujeres tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de morir que los hombres (Crate y Nuttall, 2009; Watts *et al*., 2015). Esta tasa de mortalidad drásticamente diferente se debe en parte a las disparidades en el aprendizaje y al comportamiento esperado de hombres y mujeres. Muchas mujeres están excluidas "del aprendizaje de habilidades de supervivencia, como trepar árboles y nadar, útiles durante las inundaciones; [y] las restricciones al movimiento de las mujeres en tiempos de crisis [...] [disuaden] a las mujeres de salir de casa sin el permiso de un hombre" (Crate y Nuttall, 2009: 15; cf. Watts *et al*., 2015).

Una perspectiva cultural también ayuda a explicar la capacidad de adaptación, incluidas la forma en que se entiende el cambio ambiental y las respuestas que se consideran factibles. Prácticas sociales como la creación de redes de parentesco o de vecindad, pueden aumentar la capacidad de hacer frente a una amenaza, pues los miembros de la red comparten el acceso a la información, el transporte y otros recursos.

Factores tangibles e intangibles

Las vulnerabilidades sociales al cambio climático son tanto tangibles como intangibles. En concordancia con la preparación ante los desastres, las evaluaciones de la vulnerabilidad al cambio climático tienden a centrarse en lo tangible: la infraestructura, como carreteras y viviendas, y las bases materiales para la supervivencia y la salud, como el suministro de alimentos y agua potable. Pero el cambio climático también altera de forma indirecta los aspectos intangibles de la vida, como los sistemas sociales, los conocimientos culturales y las prácticas cotidianas, al modificar las condiciones materiales que los sustentan.

Las prácticas cotidianas son fundamentales para aprender y transmitir los conocimientos culturales (Wagner, 1981). En muchas sociedades, la caza, la pesca y la recolección no solo satisfacen las necesidades materiales, sino también ayudan a mantener los grupos y las redes sociales mediante actos de intercambio. Asimismo, estas prácticas de subsistencia preservan conjuntos fundamentales de conocimiento sobre las características de las plantas y los animales, sus asociaciones míticas y su significado espiritual, así como los atributos de los paisajes culturales en los que se encuentran (Winthrop, 2002). Estos conocimientos suelen ser específicos de cada lugar. La dimensión más importante de los conocimientos locales puede ni siquiera ser la información específica en sí misma, sino las estrategias concretas de aprendizaje sobre el mundo natural y la aplicación de los conocimientos resultantes, "prácticas que pueden diferenciar el conocimiento autóctono del científico" (Kirsch, 2001: 173).

La conservación y la transmisión de los aspectos intangibles de la vida social a menudo dependen de la conservación de los tangibles, incluidos

los entornos naturales, construidos e históricos. El devastador terremoto y tsunami de 2011 en la región noreste de Japón suscitó un renovado interés por las lecciones de los monumentos conmemorativos o "piedras del tsunami", marcadores colocados a una altura superior a la de las devastadoras inundaciones de tsunamis anteriores. Para Itoko Kitahara, especialista en historia de las catástrofes ambientales, "las piedras del tsunami son advertencias a través de las generaciones, que comunican a los descendientes la necesidad de evitar el mismo sufrimiento de sus antepasados" (en Fackler, 2011; cf. Suppasri *et al*., 2013).

Asimismo, la investigación histórica y arqueológica en Pensacola, Florida, ayuda a conectar las experiencias de los primeros asentamientos con los huracanes y otro tipo de estrés ambiental con dinámicas culturales más amplias del poder político y militar (Laracuente, 2008; 2010). En conjunto, los monumentos individuales y el registro patrimonial de las comunidades demuestran que la vulnerabilidad no es solo una condición del presente, sino más bien un producto de las dinámicas culturales que actúan a lo largo del tiempo. Por tanto, comprender la historia ambiental y de ocupación de los lugares y paisajes recuperando e investigando las pruebas físicas de experiencias pasadas (yacimientos, artefactos conservados y sus contextos) es un componente importante para reducir la vulnerabilidad.

La pérdida de patrimonio cultural tangible conlleva la consecuente pérdida de significado cultural y social que a menudo resulta invisible para quienes calculan las repercusiones del cambio climático (Adger *et al*., 2009). "La política exclusivamente experta corre el riesgo de excluir el conocimiento de las personas que priorizan las explicaciones científicas, y que en algunos casos podrían ser también las más vulnerables" (Rice *et al*., 2015: 260). Esta subvaloración puede corregirse mediante el compromiso local. Por ejemplo, científicos físicos y sociales financiados por Louisiana Sea Grant trabajaron con comunidades indígenas locales para desarrollar un plan de gestión de recursos costeros basado en una combinación de ciencias naturales y conocimientos ecológicos tradicionales, organizado en un sistema de información geográfica (Bethel *et al*., 2014). La información resultante, que incorpora las prioridades y los valores de las comunidades locales, sirve de base para la planificación y ejecución de proyectos de restauración costera.

Cuando la cultura se considera fundamental para reducir la vulnerabilidad, es más probable que los esfuerzos tengan éxito.

El riesgo y la cultura

Un clima cambiante anuncia transformaciones en los paisajes de riesgo donde viven las personas. La cultura determina a qué riesgos presta atención la gente, qué estrategias de gestión del riesgo prefiere y por qué. Del mismo modo, la memoria social —eje y producto de la cultura— determina cómo las personas piensan y afrontan los riesgos, incluidos los nuevos riesgos derivados del cambio climático. Las percepciones del riesgo, basadas en el conocimiento y la experiencia previa, y los valores atribuidos al lugar, ponen de relieve cómo la cultura se entrecruza con las causas de la vulnerabilidad y con las fuentes de adaptación y planeación de la adaptación (Adger *et al*., 2009).

La cultura sustenta la forma en que las personas perciben los riesgos, toman decisiones sobre su protección, responden a las amenazas y se recuperan de ellas. No identificar el riesgo aumenta la vulnerabilidad: si la gente no percibe inicialmente el riesgo de los impactos climáticos, no tomará medidas para reducir el daño potencial ni cambiará su comportamiento. El riesgo es producto no solo de la probabilidad y magnitud potencial de la pérdida, sino también de las relaciones e interacciones entre las personas y la naturaleza (Rayner y Cantor, 1987). Las personas tienden a percibir los riesgos cuando su organización social ideal o su visión del mundo se ven amenazadas (Douglas y Wildavsky, 1982).

El riesgo no es simplemente una cualidad objetiva del mundo físico, sino que las personas ven la naturaleza y sus riesgos asociados a través de sus lentes culturales, incluyendo sus creencias, conocimientos y necesidades. Las visiones del mundo y las percepciones del riesgo influyen, por ejemplo, en cómo la gente desaloja un área durante un huracán (Morss *et al*., 2016). Las medidas de protección, los planes de adaptación y los proyectos tienen más probabilidades de éxito cuando coinciden con las percepciones de riesgo de quienes los enfrentan. En California, en 2010-2011, el trabajo de la Coalición de Acción

Climática de Oakland con las comunidades costeras locales fue exitoso porque incorporó las percepciones de riesgo de la comunidad mediante la participación de los interesados en la comunidad a lo largo del proceso de planificación que tomó dieciocho meses (Garzon *et al*., 2012). Las opciones de adaptación que incluyen "soluciones torpes", en las que diversos tipos de personas ven reflejadas sus propias visiones culturales del mundo, sus percepciones del riesgo y sus experiencias, pueden ser menos pulcras políticamente pero tienen mejores probabilidades de ser convenidas y aplicadas (Lazrus, 2015; 2016; McNeeley y Lazrus, 2014; Verweij y Thompson, 2006).

La negación del riesgo, la inercia política y el estatus social pueden limitar la toma de decisiones individuales y colectivas, mientras que valorar la memoria social local e incentivar a la gente a utilizar su conocimiento y experiencia tienden a aumentar la acción comunitaria. Un ejemplo de valoración de la memoria social es el Coweeta Listening Project, en el suroeste de Carolina del Norte, que "pretende escuchar a los residentes de los Apalaches meridionales, integrar la ciencia social y ecológica mediante la coproducción y democratización del conocimiento, para construir conexiones útiles y significativas entre los científicos y el público" (Rice *et al*., 2015: 256). El proyecto registró observaciones personales como recuerdos que revelaban los cambios meteorológicos a lo largo de los años y los relacionaban con experiencias concretas:

> La ropa que se lleva los primeros días de clase indica cambios en el clima de verano y otoño. La profundidad a la que se entierran las tuberías de agua, la (in)capacidad para enterrar cadáveres, el destino de los insectos que pasan el invierno y el grado en que la nieve permanece en el suelo indican la profundidad de las heladas fuertes (Rice *et al*., 2015: 257).

Vulnerabilidad y bienestar

Los aspectos tangibles e intangibles de la vulnerabilidad convergen en el fenómeno del lugar. Los sistemas económicos capitalistas tratan la tierra como un bien de consumo y alienable, un mero factor de producción (Pritchard *et al*., 2000, p. 38). Desde esta perspectiva, si el cambio climático

provoca pérdida de acceso a lugares significativos, puede haber medidas para compensar a las poblaciones afectadas, ya sea mediante la reubicación o por otros medios, consiguiendo un nivel equivalente de servicios ecosistémicos. Pero con frecuencia esas pérdidas y desajustes no pueden compensarse: es posible que no haya equivalentes a un territorio con importantes asociaciones míticas, a la pesquería que sustentaba medios de vida culturalmente destacados o, simplemente, al sentido del lugar que ofrecía una base emocional y espiritual a múltiples generaciones. Por estas razones, el patrimonio cultural figura ahora en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como parte de las pérdidas y daños no económicos (CMNUCC, 2013).

Asimismo, los estudios sobre la seguridad alimentaria y la salud en el contexto del cambio climático suelen centrarse en la fisiología y la nutrición, "mientras que otros aspectos de la salud individual y comunitaria que se satisfacen a través de los alimentos y la cultura alimentaria, como las necesidades psicológicas y psicosociales, permanecen subvaluados o ausentes" (Loring y Gerlach, 2009: 471). Por ejemplo, a medida que los alimentos comprados en las tiendas sustituyen a los alimentos silvestres en las dietas de muchas comunidades nativas de Alaska, el énfasis en la nutrición adecuada (aunque importante) corre el riesgo de ocultar características importantes de la vulnerabilidad sanitaria. En las zonas rurales de Alaska, conseguir, preparar y compartir alimentos silvestres no es solo un medio de alimentación, sino también de transmisión cultural, celebración y fortalecimiento de los lazos sociales (Loring y Gerlach, 2009).

El elemento común de estos ejemplos es una ausencia presente en muchos análisis convencionales sobre la vulnerabilidad al cambio climático: la incapacidad de evaluar los efectos del cambio ambiental y social frente a un estándar de bienestar culturalmente reconocido, en lugar de la mera supervivencia física. La exploración contemporánea de este tema se basa en gran medida en la comprensión de Aristóteles de la eudaimonia, generalmente traducida como bienestar. "Aristóteles sostenía que lo que importa son las acciones, el contenido y los procesos de la vida de un individuo, más que los estados mentales transitorios y subjetivos. En consecuencia, los relatos eudaimónicos se centran en las actividades,

habilidades o 'funcionamientos' (en lugar de bienes) que constituyen una vida bien vivida" (Lamb y Steinberger, 2017: 3). Pero no podemos no identificar "formas concretas de vida que serían buenas, y aun menos, mejores, para cada ser humano" (Perry, 1998: 63). La "vida bien vivida" se define sobre todo culturalmente y quizá signifique algo diferente entre los nativos de Alaska, los ribereños de la bahía de Chesapeake y los urbanitas de Oakland. En la evaluación de la vulnerabilidad diferencial al cambio climático, esto es fundamental y se relaciona estrechamente con la forma en que las personas conocen y entienden su entorno.

Conocimiento e información

El conocimiento y la información se entretejen de múltiples maneras con la vulnerabilidad al cambio climático, determinando de forma directa e indirecta la capacidad de adaptación, la exposición y la sensibilidad de las personas. El conocimiento y la información surgen de contextos situados (Haraway, 1988), y el "acceso diferencial al conocimiento [...] [determina] quién puede beneficiarse de los recursos" (Ribot y Peluso, 2003: 168). Sin embargo, distintos tipos y fuentes de información y modos de transmisión del conocimiento afectan la forma en que las personas entienden, perciben y actúan con la información. Asimismo, es esencial comprender el contexto sociocultural en el que se aborda la vulnerabilidad para utilizar de forma efectiva los conocimientos socio científicos, locales o coproducidos. Además de los procesos de gobernanza y cultura (examinados en las secciones anteriores), la capacidad de mitigar la vulnerabilidad también es afectada por diversos aspectos y tipos de conocimientos, incluida la transmisión de conocimientos, la memoria social, el conocimiento ecológico tradicional, el conocimiento profundo y la coproducción de conocimientos.

Transmisión de conocimiento ambiental

La información sobre los pronósticos del clima y las predicciones climáticas se comunica, recibe e interpreta mediante múltiples canales que incluyen la comunicación interpersonal, la televisión, el radio, la internet y las redes

sociales (Morss *et al.*, 2017). Las personas combinan la información de fuentes variadas antes de tomar decisiones (Sadri *et al.*, 2017). Las redes sociales ayudan a las personas de manera importante a obtener, personalizar y percibir la relevancia de la información. La frase "ampliación de riesgo social" describe el hecho de que es más probable que las personas atiendan una amenaza cuando otras personas de su red social han expresado preocupación (Kasperson *et al.*, 1988). Cuando el huracán Sandy se aproximó a la costa este de Estados Unidos, las personas con redes sociales robustas, quienes tienden a tener mayor acceso a la información relevante y un mejor entendimiento del riesgo, eran más propensos a evacuar, lo cual limitó su exposición a peligros físicos (Lazrus *et al.*, 2017; Sadri *et al.*, 2017). A medida que las redes sociales fortalecen las capacidades adaptativas, ayudan a las personas a recibir y evaluar información que facilita la toma de decisiones preventivas. La percepción del riesgo dentro de las redes sociales también juega un papel crítico en la mitigación de la vulnerabilidad, al vincular la transmisión de la información, el contexto social y los factores culturales que contribuyen a la percepción del riesgo.

La percepción afecta el uso de la información para mitigar el peligro y reducir la vulnerabilidad, de uno mismo o de otros. La información científica que producen las agencias públicas y privadas puede difundirse de forma amplia al público o dirigirse a usuarios específicos; como en el caso de la divulgación de predicciones climáticas a los administradores de parques urbanos de Colorado, quienes las incorporan en sus decisiones a largo plazo para el control óptimo de inundación en las plantas (Lazrus *et al.*, 2017). Ya sea que lo produzcan agencias públicas o privadas o quienes ostentan conocimientos tradicionales comunitarios, la información relacionada con el clima está sujeta a evaluación respecto a su *importancia*, o relevancia para la decisión en turno; su *credibilidad*, en términos de precisión y de fiabilidad; y su *legitimidad*, u origen que toma en cuenta el responsable de la decisión (Cash *et al.*, 2003). El caso del ciclón Gorky, que causó 140 000 muertes en Bangladesh en 1991, ilustra bien la importancia de tales factores (Ribot, 2010). Aunque casi todos los hogares que sobrevivieron estaban enterados de las advertencias oficiales sobre el ciclón, 78% no buscaron albergues antes de la tormenta, en gran medida debido a las falsas alarmas

en años anteriores que provocaron desconfianza en los residentes sobre las advertencias (Thomas *et al*., 2011). La memoria social, sin embargo, también puede contribuir a disminuir la vulnerabilidad.

Memoria social

Los humanos deben aprender su entorno: el conocimiento de los ciclos y las amenazas ambientales no es innato (Rockman, 2003). Dicho conocimiento da lugar al concepto mismo de "peligro", informa la toma de decisiones y apoya la identificación de riesgos. El conocimiento ambiental no requiere de experiencia de primera mano, pero su acumulación y utilidad sí depende de la transmisión social efectiva (Crumley, 2002). La respuesta efectiva en la isla Simuelue, Indonesia, al tsunami de 2004 en Asia se basó en la historia oral de un terremoto y un tsunami que en 1907 mató al menos a 70% de la población de la isla. Gracias a que la mayoría de los residentes conocía la historia, en 2004 se dirigieron a tierras más altas a pocos minutos de que ocurriera el terremoto y así escaparon del tsunami (McAdoo *et al*., 2006). Este caso demuestra cómo un evento singular puede generar una memoria útil que trasciende el transcurso de una sola generación y puede ayudar a configurar la respuesta pública a los peligros. Cuando el conocimiento ambiental local se extiende más allá de la experiencia directa, individual, las comunidades pueden utilizar este conocimiento para identificar riesgos potenciales y aplicar estrategias de mitigación y adaptación locales de manera más rápida y efectiva que si esperaran a que actúen las instituciones más grandes y no locales (Evans *et al*., 2014; McDowell *et al*., 2016).

El ritmo del aprendizaje ambiental depende tanto de ciclos ambientales como de la capacidad de una comunidad para recordar los riesgos y las respuestas. Cuando la transmisión del conocimiento es robusta, las estrategias de adaptación al cambio ambiental pueden persistir durante miles de años, como lo demuestran las prácticas de las sociedades recolectoras en el Levant y los recuerdos de los paisajes de las sociedades aborígenes en Australia (Nunn y Reid, 2015; Rosen y Rivera-Collazo, 2012). En otros casos, factores económicos o políticos pueden perturbar o anteponerse al uso del conocimiento ambiental establecido. Las estrategias de manejo de sequías que surgieron durante el Dust Bowl, por ejemplo,

fueron abandonadas tras solo unas décadas. Esto ocurrió debido a los altos precios de las cosechas y a varios años con buen clima que permitieron a las personas acortar los ciclos de rotación de los cultivos y reducir la vegetación que plantaban para amortiguar el viento (Orlove *et al*., 2010). Esta memoria social no solo configura la exposición de una comunidad a las amenazas, sino también su sensibilidad hacia esa exposición y su capacidad de mitigar la vulnerabilidad.

Los procesos intracomunitarios de producción y divulgación del conocimiento pueden privilegiar ciertos tipos de conocimiento, como el conocimiento científico, o se pueden imponer discursos oficiales; ambas tendencias pueden reducir o prevenir la transmisión del conocimiento local con relevancia ambiental (Gilmartin, 1994). Acortar la profundidad de la memoria social, quizá solo por unas décadas, puede reducir la capacidad para identificar riesgos locales y, por consiguiente, aumentar la vulnerabilidad (Bone *et al*., 2011). En Puerto Rico, el conocimiento ambiental local sobre huracanes o tsunamis se ha sostenido por transmisión oral dentro de las familias y otras redes. Sin embargo, el conocimiento local se ha erosionado por la migración fuera de la isla y la falta de registro y conservación de los recuerdos de la vieja generación (Duany, 2010). Asimismo, la memoria social juega un papel crítico en la conformación del conocimiento local.

El conocimiento ecológico tradicional, indígena, local

El conocimiento ecológico tradicional, indígena o local (TEK, siglas en inglés) de las comunidades incluye información sobre el clima y fenómenos climáticos y sus impactos. Acumulado a lo largo de generaciones y continuamente depurado mediante la transmisión, el TEK suele resistir las pruebas del tiempo. A menudo es muy específico al lugar, también puede vincularse al entorno natural mediante procesos sociales y cosmológicos (Anderson, 2014; Basso, 2007; Berkes, 1999). Las comunidades indígenas son con frecuencia las primeras y más drásticamente afectadas por el cambio climático debido a su desplazamiento hacia entornos marginales y a su limitado poder político. Dichas comunidades pueden

tener un conocimiento ambiental sistematizado que incluye conocimiento sobre los procesos que pueden mejorar su capacidad adaptativa. Análisis colaborativos de TEK combinados con la ciencia convencional pueden brindar entendimientos críticos del cambio climático y la adaptación (Bennet *et al*., 2014). Las colaboraciones deben basarse en relaciones de confianza; ajustarse a protocolos culturales, éticos y legales; y reconocer que el tek está encarnado en prácticas y creencias culturales inseparables de sus contextos culturales profundos (Maldonado *et al*., 2016).

El TEK que se basa en la experiencia individual y colectiva y emplea indicadores basados en la observación directa es un elemento importante del pronóstico del clima. Uno de estos indicadores son los parhelios que se producen a partir de la humedad en el aire a grandes altitudes; a menudo se consideran señales de que vendrá alguna tormenta dentro de uno o dos días. Dichos conocimientos pueden incorporarse a la adaptación a los cambios que se producen en los ecosistemas (Berkes *et al*., 2000; Naess, 2012). Por ejemplo, los esfuerzos de adaptación de la nación de los navajo fueron obstaculizados por una escasez severa de datos meteorológicos y otras observaciones científicas que podrían haber complementado el conocimiento tradicional. Para brindar información adicional y promover respuestas adaptativas consistentes con las prioridades culturales, más de cincuenta ancianos navajos compartieron sus observaciones sobre las condiciones de los cambios ambientales (Redsteer *et al*., 2013). Como sus observaciones han coincidido con observaciones puntuales, los datos resultantes han ayudado a extender el registro de observación de cambios en la disponibilidad del agua, en el clima y en las tormentas de arena y polvo (Redsteer *et al*., 2010). Además del TEK, los estudios arqueológicos también pueden brindar rutas para mitigar la vulnerabilidad mediante del acceso al conocimiento del tiempo profundo sobre las transiciones del cambio climático.

Conocimiento del tiempo profundo

Los registros arqueológicos nos brindan datos paleoambientales y evidencia de conductas humanas contemporáneas que pueden vincularse a eventos y tendencias ambientales más amplias en múltiples escalas

temporales (Minc y Smith, 1989; Rick *et al.*, 2013; Schwadron, 2000). Esa información puede ser en particular útil para recuperar ejemplos detallados y relevantes a nivel local de impactos climáticos pasados y las respuestas humanas correspondientes. Junto con científicos del clima y otros científicos sociales y comunidades locales, los arqueólogos pueden generar datos y reunir conocimientos tradicionales y locales para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación sensibles cultural y localmente (d'Alpoim Guedes, Crabtree, Bocinsky y Kohler, 2016).

La arqueología extiende el conocimiento de la adaptación basada en el lugar, a la vez que, recupera recuerdos perdidos tras el dominio colonial, el desplazamiento forzado y la migración (Gullapalli, 2008; Nelson *et al.*, 2016). Sin embargo, el cambio climático amenaza el registro arqueológico a medida que el cambio ambiental incrementa las tasas de erosión e intensifica o acelera los efectos de las inundaciones, incendios forestales, especies invasivas y sequías (Marzeion y Levermann, 2014). Estos factores de estrés se suman a las presiones constantes del desarrollo (Morgan *et al.*, 2016).

En el Ártico, los sitios arqueológicos y lugares sagrados —que fungen como recordatorios de las técnicas para cazar focas, de los patrones de clima históricos y de la identidad comunitaria y familiar— son sensibles a sufrir daños por reducciones en el hielo marino y el permafrost. Por ejemplo, Walakpa en Alaska es un sitio moderno de cacería donde también se conservan rastros de uso humano que se remontan a al menos 4.000 años (Hollesen *et al.*, 2018). Después de que tormentas destruyeron aproximadamente la mitad del área registrada del sitio en 2014, un equipo de excavación de rescate reunió muestras el siguiente año, pero las demás secciones del sitio se erosionaron poco después de la visita del equipo (Kintisch, 2016). Muchos tipos de patrimonio cultural (incluyendo sitios arqueológicos, estructuras históricas y paisajes culturales) en varios ecosistemas son ahora dañados o destruidos a mayor velocidad que en el pasado (Hollesen *et al.*, 2018; Morgan *et al.*, 2016). Más allá de la capacidad de la arqueología para recuperar conocimiento perdido, estudios recientes desde las ciencias sociales han demostrado cómo la transmisión del conocimiento y el apego que se le tiene mejora cuando se coproduce ese conocimiento.

La coproducción del conocimiento

La producción del conocimiento, donde se encuentran formas locales con científicas (Agrawal, 1995), es un proceso interactivo que involucra historias, narrativas e instituciones formales e informales locales. Crear un espacio productivo mediante la coproducción del conocimiento elimina barreras para la adaptación al cambio climático (Dilling y Lemos, 2011; Engle y Lemos, 2010; Moser y Ekstrom, 2010; Rice *et al*., 2015). Por ejemplo, el Centro Great Lakes Integrated Sciences + Assesments (Glisa), fundado por la noaa, actúa como una organización de transición (Guston, 2001) que vincula la ciencia y los investigadores con usuarios meta y responsables políticos mediante redes de conocimiento y grupos de organizaciones de transición (Bidwell *et al*., 2013; Lemos, Kirchhoff y Ramprasad 2014). Dado que el cambio climático suele impactar de forma desproporcionada a las comunidades de color y de bajos ingresos (Shonkoff *et al*., 2011), quienes están subrepresentados en la planeación para la adaptación al cambio climático, Glisa implantó el proyecto Ready and Resilient (Listos y Resilientes) para estas comunidades en Saint Paul, MN, ee. uu. (Phadke *et al*., 2016). El proyecto "está dirigido a cumplir su meta [de resiliencia] por medio de dos vías: primero, robustecer las redes comunitarias en la ciudad, y segundo, eliminar las barreras de participación que enfrentan los integrantes de comunidades minoritarias y de bajos ingresos" (Phadke *et al*., 2016). El equipo del proyecto creó cadenas de organizaciones de transición que vinculan a Glisa con redes sociales locales mediante varias organizaciones comunitarias asociadas que trabajaban en cuatro barrios de Saint Paul (Phadke *et al*., 2016). Este acercamiento facilitó la confianza y abonó a redes sociales ya existentes que incluían a socios comunitarios y residentes locales.

Otro ejemplo de la coproducción del conocimiento proviene de la aldea de la Nación Indígena Quinault de Taholah, Washington, donde el río Quinault se une con el océano Pacífico. Debido al cambio climático y su proximidad con la zona Cascadia Subduction, la aldea es altamente vulnerable a los tsunamis, marejadas ciclónicas e inundaciones fluviales (Quinault Indian Nation, 2017a). En la planeación para el cambio climático, los líderes de la aldea no solo se basaron en las proyecciones de cambio climático que les

brindó el Estado de Washington (2012), sino también en una variedad de otras fuentes de información, que incluyeron perspectivas comunitarias, antes de proponer la reubicación a una zona más alta tierra adentro (Environmental Protection Agency, n.d). "Se convocó a reuniones de toda la aldea, junto con la realización de encuestas en línea y de puerta a puerta, para lograr un entendimiento de las condiciones, aspiraciones comunitarias y percepciones del riesgo" (U.S. Global Change Research Program, n.d.). Los resultados están capturados en el Plan Maestro de Reubicación (Quinault Indian Nation, 2017b). Mientras que la incertidumbre sobre el futuro cambio climático podría constreñir la acción del Gobierno, este ejemplo muestra que las predicciones del cambio climático son solo una de varias fuentes de conocimiento que guían las medidas de adaptación.

Conclusión

Las poblaciones no son vulnerables al cambio climático de manera uniforme. Las causas de la vulnerabilidad se relacionan en gran parte con cuestiones económicas y sociales, y no solo con una distinta exposición a los peligros ambientales y relacionados con el clima. Hemos identificado varios factores responsables de diferencias en la vulnerabilidad al cambio climático y sugerido distintas acciones para reducirla. El acceso a los recursos es un factor crítico que moldea la capacidad de una comunidad para elaborar planes frente a los impactos del cambio climático y responder a ellos. Ocuparse del acceso desigual a los recursos implica un doble reto: requiere acción en el ámbito comunitario o de proyecto, pero también de un cambio estructural a mayor escala para reducir la pobreza y la marginación política. El cambio climático presenta retos crónicos y agudos para la gobernanza efectiva. Los ejemplos exitosos de gobernanza ambiental que discutimos aquí muestran los beneficios de las alianzas entre Gobiernos, movimientos sociales y organizaciones. Los sistemas culturales determinan cómo las personas entienden el cambio ambiental, mientras que, en los planos regional o local, la cultura y la historia pueden limitar las respuestas viables a las amenazas del cambio climático. Es necesario tener información válida y oportuna sobre el clima, pero esto no es suficiente para promover acciones

efectivas a escala comunitaria. La puesta en práctica de un proceso iterativo en el que investigadores y residentes comunitarios den forma conjuntamente a la disponibilidad, la divulgación y el uso del conocimiento aumenta la probabilidad de que la información contribuya de manera significativa a las respuestas adaptativas al cambio climático.

Partiendo de esta revisión, identificamos tres áreas prometedoras de investigación sobre vulnerabilidad diferencial: la movilidad, la incertidumbre y el cambio incremental. Los análisis convencionales sobre el alcance espacial de la vulnerabilidad suelen basarse en la residencia e ignoran la *movilidad a corto plazo* entre distintas poblaciones. Se necesitan más investigaciones sobre los espacios de actividad cotidianos y cómo afectan la salud y la exposición a substancias tóxicas ambientales, el acceso a la comida y la capacidad para viajar distancias cortas y largas. En cuanto a la *incertidumbre*, las predicciones del cambio climático son sólo una de varias fuentes de conocimiento que guían la adaptación. A pesar de la incertidumbre respecto a las predicciones de cambio climático, que pueden constreñir la acción del Gobierno, la planeación de una adaptación eficaz puede ser viable. Investigaciones adicionales sobre los marcos más efectivos para la toma de decisiones sobre adaptación, que sean comprensibles por distintas poblaciones ante la incertidumbre, serían de gran beneficio para la planeación. Por último, respecto al *cambio incremental*, el cambio climático presenta también retos tanto agudos como crónicos para la adaptación, que requieren de respuestas para eventos puntuales como el tifón Haiyan, y fenómenos que se producen gradualmente, como el aumento del nivel del mar. Mientras que la amenaza de eventos puntuales puede incentivar a los Gobiernos a reasignar recursos de actividades en marcha a la reducción de la vulnerabilidad, el cambio ambiental gradual, aunque es asimismo serio, pocas veces provoca una respuesta significativa. Identificar estrategias para promover una participación más efectiva en torno a las manifestaciones graduales del cambio climático constituye un tema importante para el trabajo interdisciplinario.

Agradecimientos

Este grupo de trabajo fue facilitado por Susan Goodwin (Departamento del Interior). Katie Reeves (contratista de usgcrp) brindó apoyo administrativo. Financiamiento del taller Social Science Perspectives y actividades de seguimiento fueron proporcionadas por el National Aeronautics and Space Administration (beca NN17AG17G), la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, la Asociación Americana de Antropología, la Asociación Estadounidense de Geógrafos, la American Sociological Association y la Society for American Archaeology. La Escuela Forestal y de Estudios del Medio Ambiente en Yale University condujo una sesión de escritura para este equipo. También queremos reconocer los comentarios útiles que nos brindaron durante y después del taller Chelsea Combest Friedman, Michael Craghan, Emily Eisenhauer, Stacey Fritz, Anne Grambsch, Holly Hapke, Sam Higuchi, Fen Hunt, Anna Kerttula, Keely Maxwell, Tom McGovern, Andy Miller, Leah Nichols y John Primo.

Referencias

Adger, W. N., N. Arnell y E. Tompkins. (2005). Successful adaptation to climate change across scales. *Global Environmental Change*, *15*(2), 77-86.

Adger, W. N., J. Barnett, K. Brown, N. Marshall y K. O'Brien. (2013). Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. *Nature Climate Change*, *3*(2), 112-117. https://doi.org/10.1038/nclimate1666

Adger, W. N., S. Dessai, M. Goulden, M. Hulme, I. Lorenzoni, D. R. Nelson y A. Wreford. (2009). Are there social limits to adaptation to climate change? *Climatic Change*, *93*(3-4), 335.

Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change*, *26*(3), 413-439.

Al Nahian, M., G. M. T. Islam y S. K. Bala. (2013). A new approach in gender vulnerability assessment using matrix framework. En *Proceedings of the 4th International Conference on Water & Flood Management (ICWFM-2013)* (539-548). Institute of Water and Flood Management.

Allen, K. M. (2006). Community-based disaster preparedness and climate adaptation: local capacity-building in The Philippines. *Disasters*, *30*(1), 81-101.

Anderson, E. N. (2014). *Caring for place: ecology, ideology, and emotion in traditional landscape management*. Left Coast Press.

Anguelovski, I., L. Shi, E. Chu, D. Gallagher, K. Goh, Z. Lamb y H. Teicher. (2016). Equity impacts of urban land use planning for climate adaptation: critical perspectives from the global North and South. *Journal of Planning Education and Research*, *36*(3), 333-348.

Atteridge, A. y E. Remling. (2018). Is adaptation reducing vulnerability or redistributing it? *wires Climate Change*, *9*(1), e500-e516. https://doi.org/10.1002/wcc.500

Austin, R. y M. Schill. (1994). *Unequal protection*. Sierra Club Books.

Basso, K. H. (2007). *Wisdom sits in places: landscape and language among the Western Apache*. University of New Mexico Press.

Bennett, T. M. B., N. G. Maynard, P. Cochran, R. Gough, K. Lynn, J. Maldonado y K. Cozzeo. (2014). Indigenous peoples, lands, and resources: climate change impacts in the United States. En J. M. Melillo, T. C. Richmond y G. W. Yohe (ed.), *Third national climate assessment* (pp. edited 297-317). U.S. Global Change Research Program. https://doi.org/10.7930/J09G5JR1

Berkes, F. (1999). *Sacred ecology: traditional ecological knowledge and resource management*. Taylor & Francis.

Berkes, F. (2007). Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from resilience thinking. *Natural Hazards*, *41*(2), 283-295. https://doi.org/10.1007/s11069-006-9036-7

Berkes, F., J. Colding y C. Folke. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, *10*(5), 1251-1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2

Bethel, M. B., L. F. Brien, M. M. Esposito, C. T. Miller, H. S. Buras, S. B. Laska y C. P. Richards. (2014). Sci-tek: a gis-based multidisciplinary method for incorporating traditional ecological knowledge into Louisiana's coastal restoration decision-making processes. *Journal of Coastal Research*, *30*(5), 1081-1099. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-13-00214.1

Bidwell, D., T. Dietz y D. Scavia. (2013). Fostering knowledge networks for climate adaptation. *Nature Climate Change*, *3*(7), 610-611. https://doi.org/10.1038/nclimate1931

Blaikie, P. (1985). *The political economy of soil erosion in developing countries.* Longman Scientific & Technical.

Blaikie, P., T. Cannon, I. Davis y B. Wisner. (1994). *At risk: natural hazards, people's vulnerability, and disasters*. Routledge.

Bohle, H. G., T. E. Downing y M. J. Watts. (1994). Climate change and social vulnerability: toward a sociology and geography of food insecurity. *Global Environmental Change*, *4*(1), 37-48.

Bolin, R. (1986). Disaster impact and recovery: a comparison of black and white victims. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, *4*(1), 35-50.

Bone, C., L. Alessa, M. Altaweel, A. Kliskey y R. Lammers. (2011). Assessing the impacts of local knowledge and technology on climate change vulnerability in remote communities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *8*(3), 733-761.

Bonilla-Silva, E. (1997). Rethinking racism: toward a structural interpretation. *American Sociological Review*, *62*(3), 465-480. http://www.jstor.org/stable/2657316

Bonilla-Silva, E. (2013). *Racism without racists: color-blind racism and the persistence of racial inequality in America*. Rowman & Littlefield.

Bose, P. S. (2015). Vulnerabilities and displacements: adaptation and mitigation to climate change as a new development mantra. *Area*, *48*(2), 168-175. https://doi.org/10.1111/area.12178

Bosher, L., E. Penning-Rowsell y S. Tapsell. (2007). Resources accessibility and vulnerability in Andhra Pradesh: caste and non-caste influences. *Development and Change*, *38*(4), 615-640. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00426.x

Brunkard, J., G. Namulanda y R. Ratard. (2008). Hurricane Katrina deaths, Louisiana, 2005. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, *2*(4), 215-223.

Bulkeley, H. y M. Betsill. (2005). Rethinking sustainable cities: multilevel governance and the "urban" politics of climate change. *Environmental Politics*, *14*(1), 42-63.

Caniglia, B. S., R. J. Brulle y A. Szasz. (2015). Civil society, social movements, and climate change. En R. E. Dunlop y R. J. Brulle (eds.), *Climate change and society: sociological perspectives* (235-268). Oxford University Press.

Cash, D. W., W. C. Clark, F. Alcock, N. M. Dickson, N. Eckley, D. H. Guston y R. B. Mitchell. (2003). Knowledge systems for sustainable development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *100*(14), 8086-8091.

Chaffin, B. C., A. S. Garmestani, L. H. Gunderson, M. H. Benson, D. G. Angeler, C. A. Arnold y C. R. Allen. (2016). Transformative environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, *41*, 399-423.

Chatterjee, M. (2010). Slum dwellers' response to flooding events in the megacities of India. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, *15*(4), 337-353. https://doi.org/10.1007/s11027-010-9221-6

Chu, E., I. Anguelovski y J. Carmin. (2016). Inclusive approaches to urban climate adaptation planning and implementation in the Global South. *Climate Policy*, *16*(3), 372-392.

Cinner, J. E., W. N. Adger, E. H. Allison, M. L. Barnes, K. Brown, P. J. Cohen y T. H. Morrison. (2018). Building adaptive capacity to climate change in tropical coastal communities. *Nature Climate Change*, *8*, 117-123. https://doi.org/10.1038/s41558-017-0065-x

Ciplet, D., J. T. Roberts y M. R. Khan. (2015). *Power in a warming world: the new global politics of climate change and the remaking of environmental inequality.* MIT Press.

CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). (2013). *Non-economic losses in the context of the Work Programme on Loss and Damage*. FCCC/TP/2013/2. https://unfccc.int/resource/docs/2013/tp/02.pdf

Collins, S. L., S. R. Carpenter, S. M. Swinton, D. E. Orenstein, D. L. Childers, T. L. Gragson y A. C. Whitmer. (2011). An integrated conceptual framework for long-term social–ecological research. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *9*(6), 351-357. https://doi.org/10.1890/100068

Collins, T. W. (2010). Marginalization, facilitation, and the production of Unequal risk: the 2006 Paso del Norte floods. *Antipode*, *42*(2), 258-288.

Crate, S. A., & Nuttall, M. (2009). Introduction: Anthropology and climate change. In S. Crate & M. Nuttall (Eds.), Anthropology and climate change: From encounters to actions (9–37). Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Crumley, C. (2002). Exploring venues of social memory. En J. Climo y M. Catell (eds.), *Social memory and history: anthropological perspectives* (29-52). Altamira Press.

d'Alpoim Guedes, J. A., Crabtree, S. A., Bocinsky, R. K., & Kohler, T. A. (2016). Twenty-first century approaches to ancient problems: Climate and society. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(51), 14483–14491.

Dash, N., W. G. Peacock y B. H. Morrow. (1997). And the poor get poorer: a neglected black community. En W. G. Peacock, H. Gladwin y B. H. Morrow (eds.), *Hurricane Andrew: ethnicity, gender, and the sociology of disasters* (206-225). Routledge.

Denton, F. (2002). Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: why does gender matter? *Gender and Development*, *10*(2), 10-20.

Diakakis, M., G. Deligiannakis, K. Katsetsiadou y E. Lekkas. (2015). Hurricane Sandy mortality in the Caribbean and continental North America. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, *24*(1), 132-148. https://doi.org/10.1108/DPM-05-2014-0082

Dilling, L. y M. C. Lemos. (2011). Creating usable science: opportunities and constraints for climate knowledge use and their implications for science policy. *Global Environmental Change*, *21*(2), 680-689. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.11.006

Douglas, M. y A. Wildavsky. (1982). *Risk and culture: an essay on the selection of technological and environmental dangers.* University of California Press.

Duany, J. (2010). *La nación en vaivén: identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico*. Ediciones Callejón.

Engle, N. L. (2011). Adaptive capacity and its assessment. *Global Environmental Change*, *21*(2), 647-656. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378011000203

Engle, N. L. y M. C. Lemos. (2010). Unpacking governance: building adaptive capacity to climate change of river basins in Brazil. *Global Environmental Change*, *20*(1), 4-13. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378009000466

Environmental Protection Agency. (n.d.). *Quinault Indian Nation plans for relocation*. Climate Change Adaptation Resource Center. Retrieved from https://www.epa.gov/arc-x/quinault-indian-nation-plans-relocation

Evans, L., T. L. Milfont y J. Lawrence. (2014). Considering local adaptation increases willingness to mitigate. *Global Environmental Change*, *25*, 69-75. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.013

Faber, J. W. (2015). Superstorm Sandy and the demographics of flood risk in New York City. *Human Ecology*, *43*(3), 363-378.

Fackler, M. (2011, 20-21 de abril). Tsunami warnings, written in stone. *New York Times*, A6. https://nyti.ms/2mOtlwF

Fothergill, A. y L. A. Peek. (2004). Poverty and disasters in the United States: a review of recent sociological findings. *Natural Hazards*, *32*, 89-110.

Gaillard, J. C. (2010). Vulnerability, capacity and resilience: perspectives for climate and development policy. *Journal of International Development*, *22*(2), 218-232.

Gaillard, J. C., M. Glantz, I. Kelman, B. Wisner, Z. Delica-Willison y M. Keim. (2014). Back to the future—Taking the "naturalness" out of "natural" disaster (again): what about climate change?" *Natural Hazards Observer*, *38*(3), 14-16.

Garzon, C., H. Cooley, M. Heberger, E. Moore, L. Allen, E. Matalon *et al*. (2012). *Community-based climate adaptation planning: case study of Oakland, California*. Publication number: CEC-500-2012-038. California Energy Commission.

Gilmartin, D. (1994). Scientific empire and imperial science: colonialism and irrigation technology in the Indus Basin. *The Journal of Asian Studies*, *53*(4), 1127-1149.

Graham, S., J. Barnett, R. Fincher, C. Mortreux y A. Hurlimann. (2015). Towards fair local outcomes in adaptation to sea-level rise. *Climatic Change*, *130*, 411-424.

Grasso, M. (2010). An ethical approach to climate adaptation finance. *Global Environmental Change*, *20*(1), 74-81.

Greene, M. (1992). Housing recovery and reconstruction: lessons from recent urban earthquakes. En *Proceedings of the 3rd U.S./Japan Workshop on Urban Earthquakes*, 93-B. Earthquake Engineering Research Institute.

Gullapalli, P. (2008). Heterogenous encounters: colonial histories and archaeological experiences. En M. Liebmann y U. Rizvi (eds.), *Archaeology and the postcolonial critique* (pp. 35-52). Altamira Press.

Guston, D. H. (2001). Boundary organizations in environmental policy and science: an introduction. *Science, Technology, & Human Values*, *26*(4), 399-408.

Hallegatte, S. (2012). *An exploration of the link between development, economic growth, and natural risk. Policy Research Working Paper 6216*. World Bank.

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, *14*(3), 575-599.

Hardy, R. D., R. A. Milligan y N. Heynen. (2017). Racial coastal formation: the environmental injustice of colorblind adaptation planning for sea-level rise. *Geoforum*, *87*, 62-72. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.10.005

Hollesen, J., M. Callanan, T. Dawson, R. Fenger-Nielsen, T. Friesen, A. Jensen... y M. Rockman. (2018). Climate change and the deteriorating archaeological and environmental archives of the Arctic. *Antiquity*, *92*(363), 573-586. https://doi.org/10.15184/aqy.2018.8

ICLEI. (2015). *Resilient city agenda*. http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Images_and_logos/Resilience_Resource_Point/ICLEI_Resilient_City_Agenda_Profile_Jan2016.pdf

Jonkman, S. N., B. Maaskant, E. Boyd y M. L. Levitan. (2009). Loss of life caused by the flooding of New Orleans after hurricane Katrina: analysis of the relationship between flood characteristics and mortality. *Risk Analysis*, *29*(5), 676-698. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01190.x

Kasperson, R. E. y J. X. Kasperson. (2001). *Climate change, vulnerability, and social justice*. Stockholm Environment Institute. http://stc.umsl.edu/essj/unit4/climate%20change%20risk.pdf

Kasperson, R. E., O. Renn, P. Slovic, H. S. Brown, J. Emel, R. Goble... y S. Ratick. (1988). The social amplification of risk: a conceptual framework. *Risk Analysis*, *8*(2), 177-187.

Kates, R. W., C. E. Colten, S. Laska y S. P. Leatherman. (2006). Reconstruction of New Orleans after Hurricane Katrina: a research perspective. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *103*(40), 14653-14660.

Kintisch, E. (2016. 26 de enero). History is melting. *Hakai Magazine*. http://bit.ly/1PSoFxb

Kirsch, S. (2001). Lost worlds: environmental disaster, "culture loss", and the law. *Current Anthropology*, *42*(2), 167-178.

Klinenberg, E. (2002). *Heat wave: a social autopsy of disaster in Chicago*. University of Chicago Press.

Kunz, M. B., T. Mühr, J. E. Kunz-Plapp, J. E. Daniell, B. Khazai, F. Wenzel... y J. Zschau. (2013). Investigation of superstorm Sandy 2012 in a multi-disciplinary approach. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *13*, 2579-2598.

Kwan, M.-P. (2013). Beyond space (as we knew it): toward temporally integrated geographies of segregation, health, and accessibility. *Annals of the Association of American Geographers*, *103*(5), 1078-1086.

Kwan, M.-P. y T. Schwanen. (2016). Geographies of mobility. *Annals of the American Association of Geographers*, *106*(2), 243-256.

Lamb, W. F. y J. K. Steinberger. (2017). Human well-being and climate change mitigation. *wires Climate Change*, *8*(6), e485. https://doi.org/10.1002/wcc.485

Laracuente, N. R. (2008). *An analysis of Spanish Pensacola as a behavioral landscape* [tesis de maestría, Department of Anthropology, University of West Florida]. http://etd.fcla.edu/WF/WFE0000138/Laracuente_Nicolas_Ruben_200812_MA.pdf

Laracuente, N. R. (2010). *Choosing the lesser evil: traumatic events and settlement preference in first Spanish-period Pensacola* [ponencia en la *Annual Meeting of the Society for Historical Archaeology*, Amelia Island, FL].

Lazrus, H. (2015). Risk perception and climate adaptation in Tuvalu: a combined cultural theory and traditional knowledge approach. *Human Organization*, *74*, 52-61.

Lazrus, H. (2016). Drought is a relative term: drought risk perceptions and water management preferences among diverse community

members in the Arbuckle-Simpson Aquifer. *Human Ecology*, *44*, 595-605.

Lazrus, H., O. Wilhelmi, J. Henderson, R. E. Morss y A. Dietrich. (2017). Information as intervention: how can hurricane risk communication reduce vulnerability? [ponencia en la *Annual Meeting of the American Meteorological Society*, Seattle, WA].

Lebel, L. y B. T. Sinh. (2007). Risk reduction or redistribution? Flood management in the Mekong region. *Asian Journal of Environment and Disaster Management*, *1*(1), 23-39.

Leichenko, R. y J. A. Silva. (2014). Climate change and poverty: vulnerability, impacts, and alleviation strategies. *wires Climate Change*, *5*(4), 539-556.

Lemos, M. C., C. J. Kirchhoff, S. E. Kalafatis, D. Scavia y R. B. Rood. (2014). Moving climate information off the shelf: boundary chains and the role of risas as adaptive organizations. *Weather, Climate, and Society*, *6*(2), 273-285. http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/WCAS-D-13-00044.1

Lemos, M. C., Y. J. Lo, D. R. Nelson, H. Eakin y A. M. Bedran-Martins. (2016). Linking development to climate adaptation: leveraging generic and specific capacities to reduce vulnerability to drought in ne Brazil. *Global Environmental Change*, *39*, 170-179. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.001

Lerner, A. M. y H. Eakin. (2011). An obsolete dichotomy? Rethinking the rural-urban interface in terms of food security and production in the global south. *Geographical Journal*, *177*(4), 311-320. https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2010.00394.x

Lobao, L. M., L. Adua y G. Hooks. (2014). Privatization, business attraction, and social services across the United States: local governments' use of market-oriented, neoliberal policies in the post-2000 period. *Social Problems*, *61*(4), 644-672. https://doi.org/10.1525/sp.2014.12180

Logan, J. R., S. Sukriti y Z. Xu. (2016). Trapped in place? Segmented resilience to hurricanes in the Gulf Coast, 1970-2005. *Demography*, *53*(5), 1511-1534.

López, G. R. (2003). The (racially neutral) politics of education: a critical race theory perspective. *Educational Administration Quarterly*, *39*(1), 68-94.

Loring, P. A. y S. C. Gerlach. (2009). Food, culture, and human health in Alaska: an integrative health approach to food security. *Environmental Science & Policy*, *12*(4), 466-478. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2008.10.006

Maldonado, J., H. Lazrus, S.-K. Bennett, K. Chief, C. M. Dhillon, B. Gough *et al*. (2016). The story of rising voices: facilitating collaboration between Indigenous and Western ways of knowing. En M. Companion y M. Chaiken (ed.), *Responses to disasters and climate change: understanding vulnerability, building resilience* (15-26). crc Press / Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.1201/9781315315928-3

Marzeion, B. y A. Levermann. (2014). Loss of cultural world heritage and currently inhabited places to sea-level rise. *Environmental Research Letters*, *9*(3), 34001. http://stacks.iop.org/1748-9326/9/i=3/a=034001

McAdoo, B. G., L. Dengler, M. Eeri, G. Prasetya y V. Titov. (2006). Smong: how an oral history saved thousands on Indonesia's Simeulue Island during the December 2004 and March 2005 tsunamis. *Earthquake Spectra*, *22*(S3), S661-S669.

McCright, A. M. y R. E. Dunlap. (2015). Comparing two measures of social movement identity: the environmental movement as an example. *Social Science Quarterly*, *96*(2), 400-416.

McDowell, G., J. Ford y J. Jones. (2016). Community-level climate change vulnerability research: trends, progress, and future directions. *Environmental Research Letters*, *11*(3), 33001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/3/033001

McNeeley, S. M., T. L. Even, J. B. M. Gioia, C. N. Knapp y T. A. Beeton. (2017). Expanding vulnerability assessment for public lands: the

social complement to ecological approaches. *Climate Risk Management*, *16*, 106-119. https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.01.005

McNeeley, S. M. y H. Lazrus. (2014). The cultural theory of risk for climate change adaptation. *Weather, Climate, and Society*, *6*, 506-519.

Mileti, D. S. (1999). *Disasters by design: a reassessment of natural hazards in the United States*. Joseph Henry Press.

Miller Hesed, C. D. y M. Paolisso. (2015). Cultural knowledge and local vulnerability in African American communities. *Nature Climate Change*, *5*(7), 683-687. https://doi.org/10.1038/nclimate2668

Minc, L. D. y K. P. Smith. (1989). The spirit of survival: cultural responses to resource variability in North Alaska. En P. Halstead y J. O'Shea (eds.), *Bad year economics: cultural responses to risk and uncertainty* (pp. 8-39). Cambridge University Press.

Morgan, M., M. Rockman, C. Smith y A. Meadow. (2016). *Climate change impacts on cultural resources. Cultural resources partnerships and science*. National Park Service.

Morrow, B. H. (1999). Identifying and mapping community vulnerability. *Disasters*, *23*(1), 11-18.

Morss, R., J. Demuth, H. Lazrus, L. Palen, C. Barton, C. Davis *et al*. (2017). Hazardous weather prediction and communication in the modern information environment. *Bulletin of the American Meteorological Society*, *98*(12), 2653-2674. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-16-0058.1

Morss, R. E., J. L. Demuth, J. K. Lazo, K. Dickinson, H. Lazrus, & B. H. Morrow. 2016. Understanding public hurricane evacuation decisions and responses to forecast and warning messages. *Weather and Forecasting* 31: 395–417.

Moser, S. C. y J. A. Ekstrom. (2010). A framework to diagnose barriers to climate change adaptation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *107*(51), 22026-22031. https://doi.org/10.1073/pnas.1007887107

Moser, S. C., S. J. Williams y D. F. Boesch. (2012). Wicked challenges at land's end: managing coastal vulnerability under climate change. *Annual Review of Environment and Resources*, *37*, 51-78.

Mustafa, D., S. Ahmed, E. Saroch y H. Bell. (2010). Pinning down vulnerability: from narratives to numbers. *Disasters*, *35*(1), 62-86. https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2010.01193.x

National Research Council. (2004). *Reducing future flood losses: the role of human actions: summary of a workshop, March 2, 2004, Washington, DC: a summary to the disasters roundtable*. National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11171

Næss, L. O. (2012). The role of local knowledge in adaptation to climate change. *wires Climate Change*, *4*(2), 99-106. https://doi.org/10.1002/wcc.204

Nelson, M. C., S. E. Ingram, A. J. Dugmore, R. Streeter, M. A. Peeples, T. H. McGovern *et al.* (2016). Climate challenges, vulnerabilities, and food security. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *113*(2), 298-303.

Norfolk, Virginia, City of. (2004). *Coastal resilience strategy*. https://www.norfolk.gov/DocumentCenter/View/16292

Nunn, P. D. y N. J. Reid. (2015). Aboriginal memories of inundation of the Australian Coast dating from more than 7000 years ago. *Australian Geographer*, *91*(82), 1-37.

O'Keefe, P., K. Westgate y B. Wisner. (1976). Taking the naturalness out of natural disasters. *Nature*, *260*, 566-567.

Omi, M. y H. Winant. (2015). *Racial formation in the United States* (3.a ed.). Routledge.

Onta, N. y B. P. Resurreccion. (2011). The role of gender and caste in climate adaptation strategies in Nepal. *Mountain Research and Development*, *31*(4), 351-356. https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00085.1

Orlove, B., C. Roncoli, C. Kabugo y A. Majugu. (2010). Indigenous climate knowledge in southern Uganda: the multiple components of a dynamic regional system. *Climatic Change*, *100*(2), 243-265.

Paolisso, M. (2002). Blue crabs and controversy on the Chesapeake Bay: a cultural model for understanding watermen's reasoning about blue crab management. *Human Organization*, *61*(3), 226-239.

Peacock, W. G., B. H. Morrow y H. Gladwin. (1997). *Hurricane Andrew: ethnicity, gender, and the sociology of disasters*. Routledge.

Perchoux, C., B. Chaix, S. Cummins y Y. Kestens. (2013). Conceptualization and measurement of environmental exposure in epidemiology: accounting for activity space related to daily mobility. *Health & Place*, *21*, 86-93. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.01.005

Perry, M. J. (1998). *The idea of human rights: four inquiries*. Oxford University Press.

Pew Research Center. (2016, 26 de junio). On views of race and inequality, blacks and whites are worlds apart. *Social & Demographic Trends*. http://www.pewsocialtrends.org/2016/06/27/on-views-of-race-and-inequality-blacks-and-whites-are-worlds-apart/

Phadke, R., C. Manning e I. Bardaglio. (2016). Ready & resilient: climate preparedness in Saint Paul, Minnesota. En D. Brown, W. Baule, L. Briley, E. Gibbons e I. Robinson (eds.), *Project reports* (1-14). Great Lakes Integrated Sciences and Assessments Center. http://glisa.umich.edu/media/files/projectreports/GLISA_ProjRep_Macalester_2015.pdf

Phillips, B. D. (1993). Cultural diversity in disasters: sheltering, housing, and long term recovery. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, *11*(1), 99-110.

Pritchard, L., Jr., C. Folke y L. Gunderson. (2000). Valuation of ecosystem services in institutional context. *Ecosystems*, *3*(1), 36-40. https://doi.org/10.1007/s100210000008

Quinault Indian Nation. (2017a). *Noskiakos: the Taholah village relocation master plan*. Draft 3/7/2017. http://www.quinaultindiannation.com/planning/PlanDraft03-07-2017.pdf

Quinault Indian Nation. 2017b. *Taholah village relocation master plan project*. Retrieved from http://www.quinaultindiannation.com/planning/projectinfo.html

Rappaport, R. (1979). *Ecology, meaning, and religion*. North Atlantic Books.

Ray-Bennett, N. S. (2009). The influence of caste, class and gender in surviving multiple disasters: a case study from Orissa, India. *Environmental Hazard*, *8*(1), 5-22. https://doi.org/10.3763/ehaz.2009.0001

Rayner, S. y R. Cantor. (1987). How fair is safe enough? The cultural approach to societal technology choice. *Risk Analysis*, *7*(1), 3-9. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1987.tb00963.x

Redsteer, M. H., K. Bemis, K. Chief, M. Gautam, B. R. Middleton y R. Tsosie. (2013). Unique challenges facing southwestern tribes. En G. Garfin, A. Jardine, R. Merideth, M. Black y S. LeRoy (eds.), *Assessment of climate change in the Southwest United States: a report prepared for the National Climate Assessment, a report by the Southwest Climate Alliance* (385-404). Island Press.

Redsteer, M. H., K. B. Kelley, H. Francis y D. Block. (2010). Disaster risk assessment case study: recent drought on the Navajo Nation, Southwestern United States. En *2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction* (pp. 1-19). United Nations Office for Disaster Risk Reduction. https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Redsteer_Kelley_Francis_&_Block_2010.pdf

Ren, F. (2016). Activity space. En B. Warf (ed.), *Oxford bibliographies: geography*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/obo/9780199874002-0137

Ribot, J. (1995). The causal structure of vulnerability: its application to climate impact analysis. *GeoJournal*, *35*(2), 119-122.

Ribot, J. (2010). Vulnerability does not just fall from the sky: toward multiscale pro-poor climate policy. En R. Mearns y A. Norton (eds.), *Social dimensions of climate change: equity and vulnerability in a warming world* (pp. 47-74). The World Bank.

Ribot, J. C. y N. L. Peluso. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153-181.

Rice, J. L., B. J. Burke y N. Heynen. (2015). Knowing climate change, embodying climate praxis: experiential knowledge in Southern Appalachia. *Annals of the Association of American Geographers*, *105*(2), 253-262. https://doi.org/10.1080/00045608.2014.985628

Rick, T. C., P. J. Kirch, J. M. Erlandson y S. M. Fitzpatrick. (2013). Archaeology, deep history, and the human transformation of island ecosystems. *Anthropocene*, *4*, 33-45. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2013.08.002

Roberts, J. T. y B. Parks. (2006). *A climate of injustice: global inequality, North-South politics, and climate policy*. mit Press.

Rockman, M. (2003). Knowledge and learning in the archaeology of colonization. En M. Rockman y J. Steele (eds.), *The colonization of unfamiliar landscapes: the archaeology of adaptation* (3-24). Routledge.

Rosen, A. M. y I. Rivera-Collazo. (2012). Climate change, adaptive cycles, and the persistence of foraging economies during the Late Pleistocene/Holocene transition in the Levant. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *109*(10), 3640-3645. https://doi.org/10.1073/pnas.1113931109

Rudolph, L., S. Gould y J. Berko. (2015). *Climate change, health, and equity: opportunities for action*. Public Health Institute. https://www.phi.org/uploads/application/files/h7fjouo1i38v3tu427p9s9kcmhs3oxsi7tsg1fovh3yesd5hxu.pdf

Rugh, J. S. y D. S. Massey. (2010). Racial segregation and the American foreclosure crisis. *American Sociological Review*, *75*(5), 629-651. https://doi.org/10.1177/0003122410380868

Ruppert, T. y E. L. Deady. (2017). Climate change impacts on law and policy in Florida. En *Florida's climate: changes, variations, & impacts* (209-234). Florida Climate Institute. https://doi.org/10.17125/fci2017.ch07

Sadri, A. M., S. V. Ukkusuri y H. Gladwin. (2017). The role of social networks and information sources on hurricane evacuation decision making. *Natural Hazards Review*, *18*(3). https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000244

Schmeltz, M. T., S. K. González, L. Fuentes, A. Kwan, A. Ortega-Williams y L. P. Cowan. (2013). Lessons from Hurricane Sandy: a community response in Brooklyn, New York. *Journal of Urban Health*, *90*(5), 799-809. https://doi.org/10.1007/s11524-013-9832-9

Schwadron, M. (2000). Archaeological investigations at De Soto National Memorial: perspectives on the site formation and cultural history of the Shaw's Point Site (8MA7), Manatee County, Florida. *The Florida Anthropologist*, *53*(2-3), 168-188.

Sen, A. (1984). Rights and capabilities. En A. Sen (ed.), *Resources, values and development* (307-204). Basil Blackwell.

Shea, K. M., R. T. Truckner, R. W. Weber y D. B. Peden. (2008). Climate change and allergic disease. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, *122*(3), 443-453.

Shearer, C. (2012a). The political ecology of climate adaptation assistance: Alaska natives, displacement, and relocation. *Journal of Political Ecology*, *19*, 174-183.

Shearer, C. (2012b). The social construction of Alaska native vulnerability to climate change. *Race, Gender and Class*, *19*(1-2), 61-79.

Shepherd, M. y B. K. C. Binita. (2015). Climate change and African Americans in the USA. *Geography Compass*, *9*(11), 579-591. https://doi.org/10.1111/gec3.12244

Shi, L., E. Chu, I. Anguelovski, A. Aylett, J. Debats, K. Goh y J. T. Roberts. (2016). Roadmap towards justice in urban climate adaptation research. *Nature Climate Change*, *6*(2), 131.

Shonkoff, S., R. Morello-Frosch, M. Pastor y J. Sadd. (2011). The climate gap: environmental health and equity implications of climate change and mitigation policies in California—A review of the literature. *Climatic Change*, *109*(1), 485-503.

Silm, S. y R. Ahas. (2014). Ethnic differences in activity spaces: a study of out-of-home nonemployment activities with mobile phone data. *Annals of the Association of American Geographers*, *104*(3), 542-559.

Simonds, V. W., N. Wallerstein, B. Durán y M. Villegas. (2013). Community-based participatory research: its role in future cancer research and public health practice. *Preventing Chronic Disease*, *10*, 120205. https://doi.org/10.5888/pcd10.120205

Smit, B. y J. Wandel. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. *Global Environmental Change*, *16*(3), 282-292. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378006000410

Sultana, F. (2014). Gendering climate change: geographical insights. *The Professional Geographer*, *66*(3), 372-381. https://doi.org/10.1080/00330124.2013.821730

Sultana, F. (2017). Gender and water in a changing climate: challenges and opportunities. En *Water security across the gender divide* (vol. 93, 2.a ed., pp. 17-33). Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64046-4_2

Suppasri, A., N. Shuto, F. Imamura, S. Koshimura, E. Mas y A. C. Yalciner. (2013). Lessons learned from the 2011 great East Japan tsunami: performance of tsunami countermeasures, coastal buildings, and tsunami evacuation in Japan. *Pure and Applied Geophysics*, *170*(6), 993-1018.

Thomas, K., M. de Chaisemartin, M. van der Valk, L. Hermans, R. Borel, A. N. M. Muniruzzaman... y M. Enthoven. (2011). *Climate change, water stress, conflict and migration*. International Hydrological Programme / Unesco.

Tschakert, P. y K. A. Dietrich. (2009). Anticipatory learning for climate change adaptation and resilience. *Ecology and Society*, *15*(2), 1-11.

U.S. Global Change Research Program. (n.d.). *U.S. climate resilience toolkit: Quinault Indian Nation plans for village relocation*. https://toolkit.climate.gov/case-studies/quinault-indian-nation-plans-village-relocation

Verweij, M., y M. Thompson. (2006). *Clumsy solutions for a complex world*. Cambridge University Press.

Wagner, R. (1981). *The invention of culture* (Ed. revisada). University of Chicago Press.

Warner, B. P. y C. Kuzdas. (2016). Manufactured global-change risk pathways in industrial-based agrarian development. *Climate and Development*, *8*(5), 385-396. https://doi.org/10.1080/17565529.2015.1085359

Washington State. (2012). *Preparing for a changing climate: Washington state's integrated climate response strategy*. https://fortress.wa.gov/ecy/publications/summarypages/1201004.html

Watts, M. J. (1983). *Silent violence*. University of California Press.

Watts, M. J. y H. Bohle. (1993). The space of vulnerability: the causal structure of hunger and famine. *Progress in Human Geography*, *17*(1), 43-68.

Watts, N., W. N. Adger, P. Agnolucci, J. Blackstock, P. Byass, W. Cai... y A. Costello. (2015). Health and climate change: policy responses to protect public health. *The Lancet*, *386*(10006), 1861-1914. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60854-6

Weber, E. U. (1997). Perception and expectation of climate change: precondition for economic and technological adaptation. En M. H. Bazerman, A. E. Tenbrunsel y D. M. Messick (eds.), *Environment, ethics, and behavior: the psychology of environmental valuation and degradation* (314-341). Lexington Press.

Weiss, L., M. Lebrón y M. Chase. (2018). Eye of the storm: colonialism, capitalism, and climate in the Caribbean. *nacla Report on the Americas*, *50*(2), 109-111. https://doi.org/10.1080/10714839.2018.1479417

Widener, M. J. y J. Shannon. (2014). When are food deserts? Integrating time into research on food accessibility. *Health & Place*, *30*, 1-3. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2014.07.011

Winthrop, R. H. (2002). Defining a right to culture, and some alternatives. *Cultural Dynamics*, *14*(2), 161-183.

Wisner, B. (2001). Risk and the neoliberal state: why post-Mitch lessons didn't reduce El Salvador's earthquake losses. *Disasters*, *25*(3), 251-268.

44. El país de oro: la política del paisaje en las zonas exurbanas del condado de El Dorado, California*[1]

Craig Beebe y Stephen M. Wheeler[2]

Introducción

Los paisajes exurbanos[3] (por lo general, zonas semirrurales de baja densidad de población, a las afueras de las regiones metropolitanas) vienen siendo testigos, cada vez más, de conflictos entre el ambiente y el desarrollo, y, con frecuencia, sus contextos político-ambientales dificultan una planificación eficaz. En Estados Unidos, el crecimiento residencial es rápido en muchas de estas áreas debido a su valor como lugares de ocio y servicios. A menudo, esto conduce a la pérdida de hábitats, especies autóctonas, corredores ecológicos, tierras agrícolas y vida salvaje, y afecta a la función y calidad hidrológicas (cf. Odell *et al*., 2003; Theobald *et al*., 1997). Dichos paisajes suelen tener fuerzas políticas y sociales que apoyan muy intensamente este continuo desarrollo, así como movimientos sociales en defensa de los derechos de propiedad, lo que constituye un desafío para que puedan desarrollarse planes, políticas e instituciones favorables, y para gestionar mejor el crecimiento, proteger los hábitats y conseguir modos de transporte y vivienda más sostenibles.

1 Publicado originalmente en: Craig Beebe y Stephen M. Wheeler, 2012, "Gold country: the politics of landscape in exurban El Dorado County, California", *Journal of Political Ecology*, 19(1): 1-16. *N. de T.: Este manuscrito es una traducción fiel del trabajo original de los autores. Algunas citas dentro del texto no figuran en la lista de referencias, por lo que su ausencia en la traducción se debe a una supresión de origen.

2 Craig Beebe, Grupo Graduado en Geografía, Universidad de California, Davis, EE. UU. craigwbeebe@gmail.com (dirección actual: 5908 se Reedway Street, Portland, or 97206, EE. UU. Filiación actual: 1000 Friends of Oregon). Stephen M. Wheeler, profesor titular, Programa de Arquitectura del Paisaje, Universidad de California, Davis, One Shields Ave., Davis, CA 95616, EE. UU. smwheeler@ucdavis.edu Gracias a las dos referencias.

3 También denominados "rururbanos". ("Exurbia", en el original).

Un punto de partida es entender cómo la ecología política de las jurisdicciones exurbanas afecta a la planificación local; en este artículo exploramos estas dinámicas en una jurisdicción exurbana que está sufriendo un rápido crecimiento: el condado de El Dorado, California, en los márgenes orientales de la región metropolitana de Sacramento. Consideramos cómo distintas maneras de entender el paisaje (como fuente de recursos y riqueza, como una aislada zona rural de retiro, como un hábitat natural fundamental y como enclave "único") convergen en este escenario, sobre todo, desde los años ochenta, lo que ha dado lugar a conflictos políticos sobre cómo debería ser el paisaje y a quién debería beneficiar. La población sensibilizada del condado ha reaccionado al continuo proceso de desarrollo con el objetivo de tener el control de su futuro. La existencia de un fuerte movimiento cultural a favor de los derechos de propiedad, en parte fomentada por los propios habitantes, ha minado cualquier posible solución y ha obstaculizado una y otra vez los propios planes e instituciones. En este contexto, agentes diversos han utilizado diferentes instrumentos de poder para mantener su autoridad en relación con la fisonomía y gobernanza del paisaje, a menudo de una manera que ha debilitado de forma significativa la gobernanza y ha contribuido a la continua degradación de la integridad ecológica del entorno. Además, como evidenciamos, los conflictos en el paisaje exurbano han ignorado desde hace tiempo la economía política y el contexto social y ecológico, así como a las poblaciones y ecologías con menos poder de la jurisdicción. Esto supone un desafío para aquellos que buscan una planificación más proactiva en un escenario exurbano como el del condado de El Dorado. En la conclusión exploramos algunas potenciales directrices para futuros planes, como son el desarrollo de mecanismos de planificación local más fuertes, una planificación más colaborativa, una mejor articulación de los modelos de crecimiento alternativo y el fortalecimiento de los marcos de planificación regional y estatal.

Escenario y método

El condado de El Dorado es crucial en la historia de California, en él estaba ubicado Sutter's Mill y es donde comenzó la Fiebre del Oro de 1849. Se localiza en las laderas occidentales de las montañas de Sierra Nevada

y en él hay cañones y valles espectaculares, alcornocales y ranchos, y pintorescos vestigios de pueblos mineros. Si bien la mayoría de sus habitantes vive en el extremo occidental del condado, cerca de Sacramento, la superficie del condado se extiende también al otro lado del Bosque Nacional Eldorado, en la región del lago Tahoe, en la cresta de Sierra Nevada. En nuestro caso no hemos tenido en cuenta la zona de Tahoe porque su política, instituciones, datos demográficos e historia difieren mucho de los del resto del condado.

Debido, en parte, a su proximidad con Sacramento, que experimentó un gran crecimiento en el siglo XX, a la Fiebre del Oro del xix en el condado de El Dorado le siguió en la segunda mitad del xx una "fiebre por las tierras". Sus paisajes rurales fueron progresivamente subdivididos en parcelas y llenándose de pequeños ranchos y carreteras. En comparación con otros condados de California, este tiene una población pequeña; no obstante, en 2010 contaba con 181 058 habitantes, había aumentado 120% entre 1980 y 2010. Los nuevos residentes del condado son relativamente ricos y de una misma etnia. En 2010 el ingreso medio familiar del condado, unos 66 129 dólares, era mucho más alto que lo que era lo normal en California: 57 708 dólares. Para lo que viene siendo habitual en California y Sacramento, la composición étnica es homogénea: 88.6% de la población residente es blanca, en comparación con 55.7% en el área metropolitana de Sacramento y 57.6% en el estado de California. El porcentaje de hispanos (contados como "blancos" según el censo de EE. UU.) también es mucho más bajo en El Dorado. Aproximadamente, 80% del condado habita en viviendas independientes unifamiliares, muy por encima de la media estatal (58.3%). En la actualidad, la economía del condado depende en gran medida de actividades profesionales y de gestión, del sector servicios y del trabajo de ventas/oficina, que en conjunto representan 82.2% de la mano de obra. De media, los habitantes tardan 28.7 minutos en llegar a su trabajo y 87% realiza dichos desplazamientos en vehículo privado, lo que significa que muchos trabajan fuera del condado.

Figura 1. Mapa del condado de El Dorado.

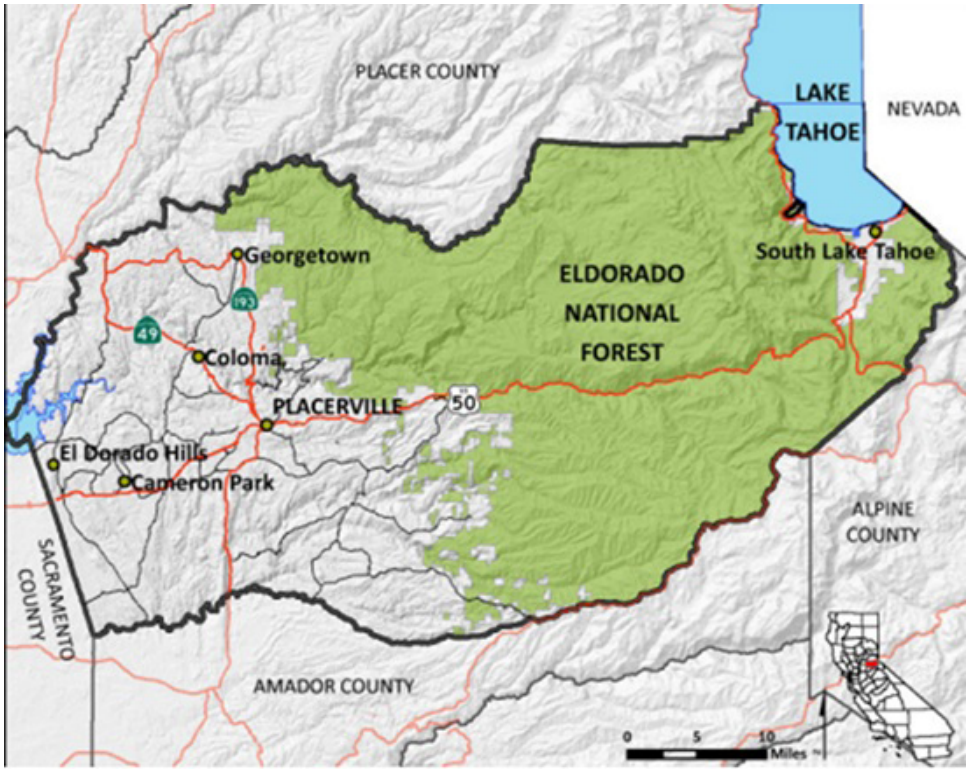
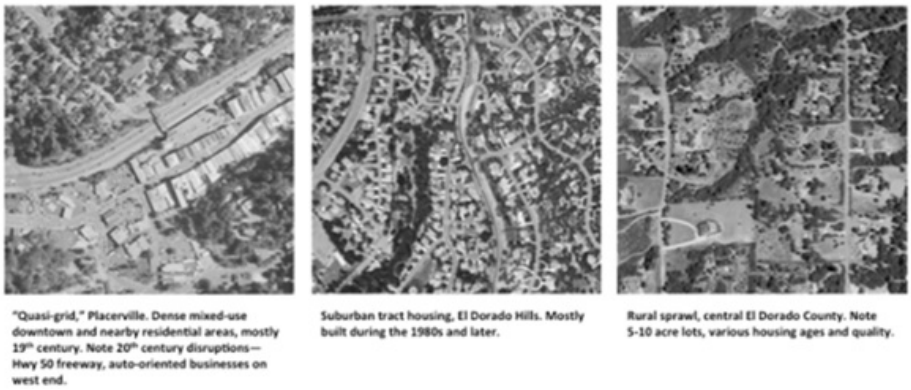


Imagen propia.

Para desarrollar este caso de estudio de la ecología política de los escenarios exurbanos, hemos empleado varios métodos. En primer lugar, buscamos comprender los patrones de desarrollo del condado mediante un análisis intensivo sig del crecimiento histórico y urbanístico utilizando mapas históricos, fotografías aéreas y registros del sector inmobiliario. Este proceso formaba parte de un gran esfuerzo por entender cómo está urbanizada, en general, la región de Sacramento, descrita con más detalle en otros trabajos (Wheeler y Beebe, 2011); como resultado, ha dado lugar a un plano detallado de 150 años de subdivisión de las tierras del

condado en intervalos de 10 años, así como a un mapeo preciso de las distintas zonas urbanizadas. Al codificar el desarrollo en ambos sentidos (cronológicamente y según la forma de edificación), pudimos comprender la variedad y distribución del desarrollo de los suburbios y áreas exurbanas del condado, y cuándo se construyeron dichos paisajes. Estos mapas nos ayudan a ilustrar que el desarrollo ha fragmentado en gran medida los paisajes del condado (Figura 3), en detrimento de su estética, de los ecosistemas y de la cohesión de la comunidad.

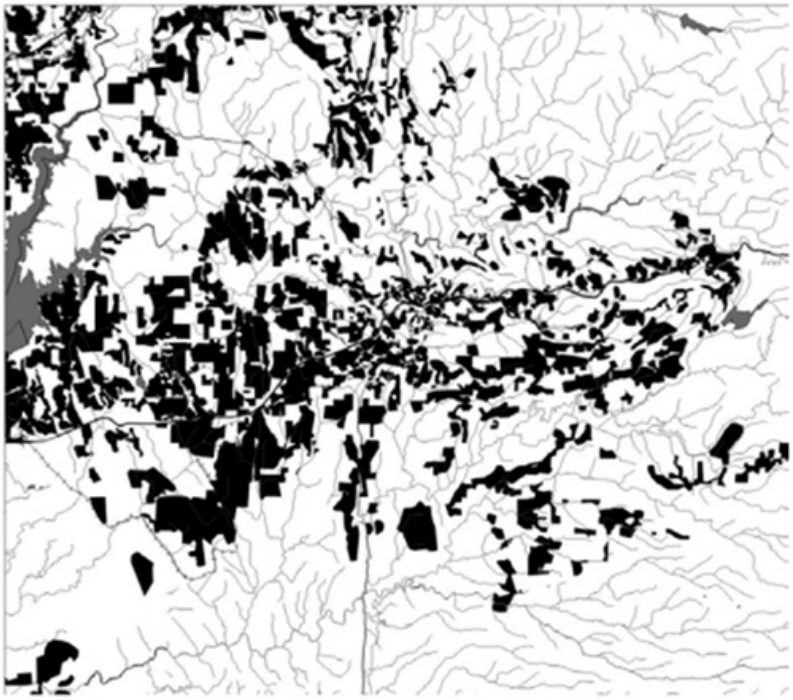
Figura 2. Ejemplos de formas de paisaje urbanizado en el condado de El Dorado en una escala igual (se muestra la tipología usada en Wheeler y Beebe, 2011).



Para comprender la historia política y de planificación urbana del condado, hemos hecho un análisis profundo de documentación (planes, noticias de prensa, crónicas, registros inmobiliarios y otras fuentes primarias) obtenida en las bibliotecas locales y regionales, los departamentos de urbanismo y los medios digitales. Todo ello aportó cuantiosos datos sobre el planeamiento urbanístico desde la década de los sesenta hasta el presente.

Por último, para obtener de primera mano una visión de la política y la planificación urbana, realizamos entrevistas semiestructuradas con trece funcionarios locales, planificadores urbanos, activistas, residentes y agentes con conocimiento del tema. Lo que perseguimos con esta selección era lograr un equilibrio de puntos de vista y experiencias relacionados con el desarrollo de las zonas exurbanas del condado de El Dorado y con los conflictos derivados. Para identificar a los potenciales informantes utilizamos la técnica de muestreo bola de nieve y otras fuentes primarias. Nos entrevistamos tanto con habitantes que llevan tiempo viviendo en este condado como con residentes más nuevos, planificadores y funcionarios locales, agentes inmobiliarios, agricultores y conservacionistas (aunque a menudo las personas entrevistadas pertenecen a más de una categoría). El periodo de entrevistas duró cinco meses; el objetivo era obtener la representatividad de una variedad de perspectivas que nos ayudase a comprender lo que la población, los funcionarios y otros agentes sociales interesados de El Dorado quieren para el futuro del condado, así como su interpretación de la historia, el crecimiento y la identidad de este. Hemos decidido mantener el anonimato de los entrevistados con el objetivo de proteger su identidad en un mundo tan relativamente pequeño como es el del condado de El Dorado.

Figura 3. Patrón de desarrollo en el oeste del condado de El Dorado, se muestra el elevado grado de fragmentación del paisaje. Esta figura representa aproximadamente un área de 30 x 40 millas (48x64 km).



Fuente: Wheeler y Beebe (2011).

Revisión bibliográfica: entendiendo el pasado del escenario exurbano

El "escenario exurbano" ("exurbia"), tal como se entiende en la actualidad (hace alusión al desarrollo de las áreas rurales con baja densidad de población que han sido ocupadas, sobre todo, por población que vivía en las regiones urbanas y suburbanas), ha experimentado un rápido crecimiento en Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Spectorsky (1955) acuñó por primera vez este término para referirse a un conjunto de comunidades de élite que

vivían en las cercanías de la ciudad de Nueva York y que se localizaban a más de una hora de distancia en automóvil o tren de dicha urbe y que se caracterizaban por sus zonas arboladas y por la dificultad para la interacción social. Previamente, el escenario exurbano había sido descrito como un anillo externo e indefinido localizado más allá de los denominados "suburbios", pero aún vinculado a la ciudad principal por medio del transporte y de la cultura (Mumford, 1961; Friedmann y Miller, 1965). Por lo general, las zonas exurbanas se veían como lujosas "casas de campo" bien conservadas (Vance, 1972). Sin embargo, hoy en. día se admite de manera generalizada que los escenarios exurbanos son considerablemente más variados en términos de ingresos y aspecto, y que a menudo se entremezclan con otros tipos de uso de terreno rural y suburbano (p. ej., Berube *et al*., 2006).

Por medio de encuestas cuantitativas, Davis y Nelson (1994) y Nelson y Sánchez (1999) descubrieron que la comunidad residente de la periferia exurbana no es tan diferente de otros habitantes de las afueras de las ciudades: blancos de clase media alta e ideología política conservadora moderada; aunque suelen ser familias con dos sueldos y a las que les lleva más tiempo desplazarse al trabajo. Por lo general, las personas exurbanas obtienen sus ingresos sobre todo de la ciudad, tanto del centro como de las entidades ubicadas a las afueras; algunos incluso trabajan desde casa (Davis y Nelson, 1994; Hayden, 2003: 185; Travis, 2007). Otros exurbanos son jubilados, pero incluso estos dependen de las ganancias percibidas en otros lugares y mediante planes de pensiones, inversiones, cobro de intereses, etc. (Duane, 1999). La población exurbana incluye también empleados de menor rango de empresas del extrarradio; residentes de clase media atraídos por lo relativamente asequible que es la zona (Berube *et al*., 2006; Johnson, 2008) y habitantes cuyas familias han vivido en estas regiones durante una o más generaciones, algunas de las cuales continúan trabajando en las industrias extractivas que quedan y en la agricultura.

Varios estudios han empleado métodos de investigación cualitativa para comprender qué motiva a las personas a mudarse a las zonas exurbanas y, con frecuencia, destacan una combinación de factores de "expulsión" y "atracción", lo que implica que cuando los exurbanitas deciden mudarse es porque intentan escapar de un entorno y buscar otro. Por ejemplo, según

Davis y Nelson (1994) el "deseo de espacio y comodidades rurales" (un factor de atracción) y la insatisfacción con la periferia (un factor de expulsión) son dos reclamos fundamentales para los habitantes de los escenarios exurbanos. Crump (2003) afirma que a la población de las zonas suburbanas del condado de Sonoma, California, le preocupan más los precios y los accesos a las autopistas, mientras que a los exurbanitas lo que más les atrae es vivir en un entorno "rural". Según Johnson (2008), para los residentes exurbanitas del área de Chicago, la privacidad y el espacio son reclamos más importantes que la naturaleza.

Las comunidades exurbanitas suelen rechazar otros paisajes de manera consciente. Daniels (1999: 26) argumenta que dichos habitantes huyen tanto de las ciudades con alta densidad de población como de "la esterilidad de la periferia". De manera similar, Halfacree (1997) señala que estos buscan estabilidad y sentido en un mundo que consideran cada vez más desprovisto de ambas cosas. El paisaje rural, que se percibe como más ordenado y predecible, pasa a ser idealizado como un lugar de historia, sentido y comodidad, donde uno es aceptado como parte de una comunidad. Sin embargo, como señalan numerosos expertos en la publicación editada por Cloke y Little (1997), tal idealización depende de y fomenta grandes desigualdades. Debido al aumento del precio del suelo y de la vivienda, la falta de nuevas viviendas asequibles y la falta de transporte público, se excluye la participación de muchos grupos demográficos en este lugar idílico. Entre ellos se encuentran algunos colectivos que vivían allí antes, sin mencionar a los residentes que se desplazan a diario a la zona para trabajar, cuyo papel principal en la economía local se orienta más al sector servicios y que, en general, no se preocupan por esa "ruralidad" que buscan los nuevos pobladores. Cuando estos "otros" desafían el idilio, surgen conflictos sobre quién tiene el "derecho" a gestionar, disfrutar de y ocupar el paisaje exurbano.

Como mejor se describe el escenario exurbano de Estados Unidos es por medio de una serie de características físicas, como, por ejemplo, parcelas de gran tamaño, carreteras estrechas, casas alejadas de la calle, bastantes graneros y otros edificios contiguos, y la falta de aceras, cunetas y otras peculiaridades "urbanas". Pero esta morfología exurbana también varía de un lugar a otro. Duane (1999: 212) identifica cinco niveles de desarrollo, desde subdivisiones

unifamiliares hasta terrenos de recursos naturales, los cuales, en su opinión, son lo que constituye el escenario exurbano. El planificador urbano Tom Daniels (1999,: 9), que prefiere el término *margen metropolitano*, argumenta que "es mejor imaginarlo no solo como un área geográfica dentro de una región metropolitana, sino también como un paso en la jerarquía de desarrollo entre las zonas rurales y la ciudad principal".

Muchos investigadores emplean métricas cuantitativas relativamente simples para determinar la extensión de las zonas exurbanas. Por ejemplo, Brown *et al.* (2005) utilizan una medida de región exurbana de una unidad por cada 1 a 40 acres, mientras que Clark *et al.* (2009) lo hacen con densidades de población de 100 a 1.000 personas por milla cuadrada, y Berube *et al.* (2006) utilizan, además de los criterios de desplazamiento y crecimiento, una compleja clasificación de la densidad demográfica basada en secciones censales de baja densidad y la proporción de unidades de vivienda nacionales totales, con un promedio de 2.6 acres por unidad. Wheeler (2007) y Wheeler y Beebe (2011) identifican la "expansión rural" como la subdivisión de la tierra en parcelas no agrícolas de uno a diez acres, con carreteras de acceso y otros recursos. Aquí utilizaremos esta última definición de desarrollo exurbano.

Aunque con cada método se descubren, en cierto modo, cuestiones diferentes relativas a la extensión y naturaleza de la periferia exurbana, algunos factores sí son claros. Primero, hoy en día las zonas exurbanas de Estados Unidos son ya, como mínimo, tan extensas como las áreas urbanas y sus alrededores (Berube *et al*., 2006; Clark *et al*., 2009; Theobald, 2001[4]; Travis, 2007). En segundo lugar, este uso del suelo está creciendo rápidamente en cuanto a la población que alberga y al espacio que ocupa (Berube *et al.* 2006). Wheeler (2007) señala que el desarrollo exurbano representó 57% del desarrollo rural en seis áreas metropolitanas de EE. UU. entre 1980 y 2005. Tercero, cabe destacar el impacto del territorio exurbano en los sistemas ecológicos, que incluye tanto efectos directos, véase la destrucción del hábitat, como los efectos más indirectos de la construcción de carreteras y

4 N de T.: Se advierte al lector que la referencia de esta cita no consta en la lista final de referencias de este artículo. Supresión de origen.

la "perforación" del paisaje debido a la construcción de viviendas (Brown *et al*., 2005; Odell *et al*., 2003; Peterson *et al*., 2008; Theobald, 2004[5]; 2005[6]; Theobald *et al*., 2003). En cuarto lugar, el desarrollo de las zonas exurbanas está cambiando profundamente la apariencia, la política y la identidad de las comunidades que alguna vez se consideraron rurales (Hurley y Walker, 2004; Travis, 2007; Walker y Fortmann 2003; Woods, 2006).

Aunque el escenario exurbano se puede estudiar desde muchos marcos analíticos, en este artículo partimos de un análisis político-ecológico para explorar la política del paisaje del Condado de El Dorado. La ecología política, comúnmente definida como "la combinación entre la preocupación por la ecología y la economía política ampliamente definida" (Blaikie y Brookfield, en Watts y Peet, 2004: 7; Robbins, 2004: 6), emplea una aproximación multimétodo que parte de varios tradiciones críticas y conceptos abstractos, entre los que se incluye la ecología cultural, los estudios campesinos, los estudios postcoloniales, el feminismo y la historia ambiental (Robbins, 2004). Por lo general, se centra en algún estudio de caso concreto de países en vías de desarrollo. Sin embargo, como Paulson *et al*. (2005) sostienen, la ecología política utiliza estos métodos con la clara intención de conectar espacios y escalas, y reconoce que los vínculos entre escalas, en particular la global y la local, suelen ser diversos y desconocidos. Tal enfoque requiere construir cadenas (o redes) de explicación (Blaikie, 1988)[7] que puedan conectar problemas en el ámbito local con procesos globales, en especial aquellos del neoliberalismo que se manifiestan en el capitalismo global y en las formas asociadas de gobernanza. Asimismo, la ecología política cuestiona los diferentes discursos que enmarcan nuestra manera de comprender el desarrollo, el ambiente, la identidad y la pobreza, entre otros conceptos, revelando cómo estos han sido construidos y reproducidos por infinidad de factores. Dicho de otra manera, como lo describe Robbins, la ecología política se centra en la "construcción y destrucción ambiental" (2004: 83), y en cómo estas fuerzas se crean y se cuestionan a diferentes niveles.

---

5 N de T.: Se advierte al lector que la referencia de esta cita no consta en la lista final de referencias de este artículo. Supresión de origen.

6 N de T.: Se advierte al lector que la cita presenta una inconsistencia con la referencia consignada. Es una inconsistencia de origen.

7 N. de T.: Se advierte al lector sobre inconsistencia de origen el año de la cita y el año de la referencia.

Si bien los análisis en ecología política se emplean con mayor frecuencia en los países en desarrollo y en las áreas rurales (Robbins, 2004), un grupo cada vez mayor de geógrafos y otros investigadores han demostrado su utilidad para entender el conflicto en las zonas urbanas de América del Norte, en respuesta a la llamada a la acción en lo referente a este tipo de análisis por parte de James McCarthy (2002; 2005). Byrne *et al*. (2007) emplean el análisis político-ecológico para explorar la historia conflictiva de un gran parque en Los Ángeles, mientras que Robbins (2007) utiliza la ecología política como una lente a través de la cual comprender la relación de los estadounidenses con sus jardines.

Dado que se define el territorio exurbano como una región fronteriza poco clara entre la poblada ciudad y la naturaleza salvaje, parece el lugar idóneo en el que realizar un análisis desde la ecología política. Son aún escasas las veces en las que se ha aplicado, exceptuando al geógrafo Peter Walker que, en colaboración con otros autores, ha demostrado la aplicación de esta línea de investigación en el condado de Nevada, al norte del condado de El Dorado y algo alejado de las principales metrópolis y centros de trabajo de la región de Sacramento. Walker (2003: 10) ha argumentado que "no hay razón para no traer la ecología política a 'casa', y… sí existen motivos de sobra para creer que puede revelar la dimensión de los conflictos por los recursos, con frecuencia ignorados a expensas de un estado permanente de conflicto, esfuerzos inútiles y oportunidades perdidas".

En el condado de Nevada, Walker y el resto de coautores se centran en una amarga lucha por un plan de conservación llamado Patrimonio Natural 2020 (Hurley y Walker, 2004; Walker, 2003; Walker y Fortmann, 2003; Walker y Hurley, 2004). El plan surgió tras un dramático giro de poder en el condado en 1998, cuando cuatro ambientalistas (todos ellos inmigrantes desde hacía poco tiempo) tomaron el control de la Junta de Supervisores del condado, la cual había estado dominada durante mucho tiempo por los intereses de ganaderos y madereros (Duane, 1999). Walker y coautores ponen de manifiesto las estrategias discursivas utilizadas por los opositores al nuevo plan, entre las que se encuentran acusaciones de elitismo socioeconómico (aunque en realidad ambos bandos incluían personas de diversas clases sociales), el uso de datos sesgados y el "ecoextremismo". La acusación principal fue

que una clase "forastera" intentaba "imponer" una visión del paisaje a los "lugareños" indefensos. Walker y Fortmann (2003: 486) argumentan que aquí la identidad "local" es irónica, en parte porque fue apoyada por las grandes industrias extractivas, y en parte porque "*ambos* lados de la lucha por el pn 2020 representan formas avanzadas de capitalismo" (subrayado original). Como mostraremos, en el condado de El Dorado están en juego dinámicas similares, aunque ofrecemos una perspectiva analítica distinta en cuanto a su importancia puesto que prestamos más atención a sus efectos en la planificación del contexto exurbano.

Una Fiebre del Oro seguida de una fiebre por las tierras: historia de los inicios de la planificación urbana de El Dorado

Al igual que muchas áreas exurbanas del oeste de Estados Unidos, desde el comienzo del asentamiento europeo-estadounidense, el condado de El Dorado ha experimentado un rápido crecimiento demográfico basado en la explotación de recursos. En 1848 James Marshall, un empleado de John Sutter, descubrió oro en un aserradero en el arroyo de South Fork, afluente del río Americano.[8] Tras el hallazgo, legiones de hombres en busca de fortuna invadieron el condado y la región situada en las laderas de Sierra Nevada (que pasó a ser conocida como la Veta Principal)[9] (Holliday, 1981). Casi de inmediato fueron naciendo industrias complementarias de agricultura, silvicultura y comercio. Y rápido, los colonos construyeron aldeas con calles claramente delimitadas, parcelas vigiladas e incluso códigos de zonificación primitivos (Reps, 1979). En contraste con el desarrollo posterior, estas comunidades tenían una alta densidad de población, y eran autónomas y de uso mixto. El auge de la minería decayó relativamente pronto, pero algunas ciudades de la región pudieron sobrevivir cambiando a otros sectores económicos rurales tradicionales, como la silvicultura y la agricultura, y gracias a su ubicación privilegiada a lo largo de las rutas comerciales más importantes. En concreto, Placerville, sede del gobierno local del condado de El Dorado, se benefició de su emplazamiento en la principal ruta comercial a Nevada y al resto de la nación.

8 American River.

9 Mother Lode.

La agricultura y la silvicultura se mantuvieron fuertes hasta bien entrado el siglo XX. Aunque la ley seca detuvo la floreciente industria del vino, muchos viñedos fueron reemplazados por campos de perales y manzanos. Sin embargo, a partir de principios de 1950, la agricultura entró en un largo periodo de declive, debido en parte a la psila del peral, un parásito transmitido por insectos, que diezmó los perales de Placerville, y en parte al éxito de las economías de escala presentes en las grandes granjas y huertos de árboles frutales de otras zonas de California (Walker, 2004). Las familias ganaderas fueron poco a poco vendiendo todo y abandonado el condado, víctimas de una gran competencia y márgenes extremadamente ajustados; en la actualidad solo quedan unas pocas familias. Muchas de las que se fueron vendieron sus propiedades a promotores. El sector maderero se mantuvo solvente hasta que la globalización y la creciente regulación de los bosques federales cerraron gran parte de la industria local a finales del siglo XX. La última serrería local cerró en 2009 (Swett, 1994; Lundstrom, 2009).

De 1950 a 2000, el crecimiento del Gobierno estatal, el gasto militar y las nuevas industrias, como la ingeniería aeronáutica y la construcción de cohetes, así como la construcción de varias autopistas importantes, contribuyeron a una expansión descomunal de la huella de la región de Sacramento. En la década de los sesenta el cambio de la ruta federal 50 a autopista federal proporcionó conexiones de alta velocidad desde el condado de El Dorado hasta el centro de Sacramento y el área de la bahía de San Francisco, lo que significó que trabajadores de toda la región ahora pueden vivir en este condado rural y desplazarse al trabajo con relativa facilidad. Nuestro análisis gis del desarrollo histórico muestra que la subdivisión del territorio exurbano alcanzó su culmen durante las décadas de los setenta y ochenta, debido, quizá, a la mayor accesibilidad (cf. Wheeler y Beebe, 2011). Es probable que las dinámicas raciales y de clase también hayan tenido que ver: los ejecutivos de grandes empresas como Aerojet acudieron en masa a las nuevas subdivisiones de suelo en el condado de El Dorado, mientras que los trabajadores con ingresos más bajos vivían en los barrios más pobres de la ciudad de Sacramento o de su periferia. La Cámara de Comercio del condado fomentó de manera ferviente el paisaje, el clima, las alternativas de ocio y las casas bonitas del condado,

así como su homogeneidad racial y económica; en un folleto se señalaba que los residentes de Placerville eran "estadounidenses casi al cien por cien" (Cámara de Comercio de El Dorado, 1946).

Durante estas décadas iniciales de rápido crecimiento residencial, las normativas de planificación se desarrollaban más lentamente que los intereses desarrollistas. En 1949 el condado adoptó la primera ordenanza de zonificación, y en 1957 creó el Departamento de Planificación Urbana (Departamento de Planificación del Condado de El Dorado, 1963). En 1963 los promotores ya habían zonificado unos 271 475 acres (de aproximadamente un millón), pero los políticos habían modificado el código de zonificación unas cuarenta veces y el personal se quejó de que esto generaba muchos vacíos legales en el código (Departamento de Planificación del Condado de El Dorado, 1963, p. 23). Para colmo, el condado carecía de mapas adecuados y no contrató a un cartógrafo hasta principios de la década de los sesenta. En ese momento los planificadores urbanos se afanaban en completar el primer Plan General del condado, pero avanzaban muy despacio debido a la falta de información o de compromiso por parte de otras agencias. En la actualidad sigue dándose esta tendencia de sobrecarga de trabajo en el Departamento de Planificación.

Desde un principio, el personal del condado parece haber interiorizado la creencia de que el *statu quo* desarrollista no supone desafío alguno. A principios de 1966, en medio del desarrollo de la primera gran subdivisión de "casas de lujo" en las Colinas de El Dorado[10] y en el parque Cameron,[11] En las zonas más occidentales del condado, se publicó una versión preliminar del primer plan general. Este documento empezaba dando por sentado que el crecimiento y el desarrollo eran inevitables. Para planificar la afluencia prevista de nuevos residentes, de los cuales se esperaba que menos de 30% trabajara en el condado antes de 1985, los planificadores sugerían que las áreas de población se "zonificaran de manera compacta" y que el desarrollo se llevara a cabo en las comunidades que ya existían; sin embargo, no proporcionaban mecanismos para hacer cumplir tales perspectivas. De hecho, el plan señala de manera

10 El Dorado Hills.

11 Cameron Park.

explícita que sus políticas "no tienen como objetivo decirle a nadie qué hacer, sino que [...] recomendarán aquellas cosas que sean de interés público" (Planning Associates, 1966: 10). Por supuesto, no se define qué es "interés público", algo que contribuirá a posteriores conflictos.

La población del condado se disparó, aumentando en 49% de 1960 a 1970, y en 96% de 1970 a 1980, año en que alcanzó la cifra de 85 812 habitantes. A finales de la década de los setenta, con el respaldo de la Junta de Supervisores más desarrollista y a favor de los derechos de la propiedad, se aprobaron anualmente sobre el mapa entre 600 y 700 subdivisiones de parcelas. Este aumento de población no estuvo regulado. Según uno de los urbanistas locales que entrevistamos, el condado "aprobó [las solicitudes] en la oficina sin ningún tipo de restricción". A pesar de que muchas de las parcelas subdivididas nunca se urbanizaron debido a su difícil acceso y falta de potencial de desarrollo, el condado se fue repartiendo poco a poco en pedacitos. Durante este tiempo el condado también permitió que se registraran "escrituras de donación", una práctica que permite obsequiar parcelas subdivididas a miembros de la familia sin ningún tipo de regulación. A menudo, se trataba de "arreglos de prestanombres", en los que el miembro de la familia que recibía el donativo vendía de inmediato la parcela y devolvía el dinero al primero. "Teníamos literalmente miles de parcelas que se habían creado así", nos dijo el planificador urbano.

En las décadas posteriores, en vez de preparar una actualización del plan general del texto básico de 1969, como lo exigía la ley estatal, el condado se centró en completar 23 planes de área para las diferentes secciones del condado. Estaba previsto que todos ellos constituyesen el nuevo plan general (p.ej., Departamento de Planificación del Condado de El Dorado, 1977). Este enfoque fragmentario resultó inadecuado para cualquier visión de uso del suelo en todo el condado. Con muy poca estrategia política general sobre cómo dirigir el crecimiento hacia áreas específicas del condado, el resultado fue que la mayoría de las áreas del condado continuó desarrollándose con densidades de población muy bajas. Aunque el condado adoptó un plan a largo plazo en 1981 como un intento por reducir la fragmentación en la toma de decisiones en relación con el desarrollo, este documento no hizo apenas nada para corregir la situación,

ya que dependía de los planes de área (Departamento de Planificación del Condado de El Dorado, 1981).

En la década de los ochenta las políticas a favor del crecimiento del condado se toparon con su primer reto serio; como las casas se multiplicaron en lugares donde no se había edificado antes, aumentó el tráfico en las carreteras del condado y en la ruta federal 50, y el crecimiento fue asemejándose más a las zonas suburbanas; sobre todo, en la parte más occidental del condado (Lambert, 1987; 1989). Por primera vez, algunos residentes comenzaron a buscar la protección de los "estilos de vida rurales" y los paisajes, ya que su ideal de retiro rural se estaba viendo amenazado por el incremento de población y de viviendas. Asimismo, muchos habitantes iban haciendo un uso cada vez más complejo de la política y retórica ambiental, debido en gran medida a su afiliación al Gobierno estatal. Tras reconocer los cambios en las dinámicas políticas, la deficiencia de los planes de área y su posible vulnerabilidad ante los desafíos jurídicos, el condado impulsó la actualización del plan general en lo que se refiere al uso del suelo del condado.

La cuestión llega a su punto crítico: el Plan General de 1996/2004

En las décadas de 1990 y 2000 las políticas de planificación de las zonas exurbanas del condado de El Dorado se intensificaron de tal manera que acabaron por convertirse en una batalla de catorce años por un nuevo plan general que ilustra la naturaleza casi inabordable de la reciente ecología política de los escenarios exurbanos de Estados Unidos. Diferentes grupos de ciudadanos, con valores y puntos de vista totalmente opuestos en cuanto a la identidad del condado, y con herramientas y grados de poder desiguales, se enfrentaron durante muchos años hasta llegar a un acuerdo. Al final, el desarrollo continuó sin apenas asesoramiento urbanístico adicional, lo que afectó a la calidad ambiental, la igualdad social y la legitimidad de las instituciones de urbanismo locales, sin preverse muchas medidas proactivas a corto plazo.

A medida que el crecimiento se hizo más visible a finales de los ochenta, algunos ciudadanos preocupados amenazaron con demandar al condado si

no adoptaba un nuevo plan general, tal como exigía la ley estatal. En respuesta, el Departamento de Planificación en cuestión, que en 1989 había perdido a seis de sus quince urbanistas, pidió una moratoria hasta que se pudiera completar un nuevo plan (Terhaar, 1989; Vistica, 1989; 1990). Los supervisores del condado negaron dicha solicitud. Tras esto, el condado contrató a un consultor de mucha reputación con sede en San Francisco, Sedway Cooke Associates, para liderar el proceso del plan general. En 1990 y 1992 se realizaron talleres de participación ciudadana en comunidades de todo el condado y se registró que la principal preocupación de la mayor parte de la población residente era "proteger el carácter rural" (Moore Iacofano Goltsman, 1990; 1992). Sedway Cooke redactó un borrador que proponía limitar el crecimiento en ciertas comunidades y permitirlo en áreas que no amenazaran la apariencia "rural" (Sedway Cooke, 1992).

Aunque este borrador recogía importantes apreciaciones en relación con el condado, muchos agentes interesados del condado lo vieron como algo demasiado complejo, que no respetaba lo suficiente el contexto y los derechos de propiedad del condado, y políticamente inviable. Al igual que en el condado de Nevada (Walker y Fortmann, 2003), los opositores al plan emplearon la retórica del "foráneo" para tirar por tierra el proyecto. Según un informante, lo que "se percibía era que habían contratado a un grupo de personas del área de la bahía de San Francisco para hacer el planeamiento de un condado rural [...] [Las políticas de planeamiento] tenían pinta de ineficientes y... se parecían demasiado a las del área de la bahía de San Francisco". Después de unas polémicas elecciones de la Junta de Supervisores en 1992 en las que se destituyó a tres titulares y en la que el crecimiento fue el tema clave (Engellenner, 1992; Rose, 1992), la nueva Junta de Supervisores canceló el contrato de Sedway Cooke y ordenó al personal que preparara el plan interno.

El segundo borrador también restringió el crecimiento, pero con menos especificidades. En las audiencias públicas sobre el plan, la respuesta fue dura desde ambos lados del espectro político (Engellenner, 1993). Los supervisores exigieron una nueva revisión y en un tercer borrador se redujo aún más el control sobre el crecimiento. Entre otros cambios, se permitió la subdivisión de terrenos con menos de diez acres en la mayoría de las áreas

rurales; se eliminaron las prohibiciones para la construcción en pendientes pronunciadas, canales de agua y crestas, y se eliminaron los requisitos obligatorios en el sector servicios, los espacios abiertos, agrupaciones y viviendas asequibles en las zonas ya urbanizadas (Bridge, 1993a; 1993b; Kinetz, 1993). Ni siquiera esta versión fue lo suficientemente buena para algunos; a medida que se acercaba la etapa de revisión ambiental, la Comisión de Planificación, nombrada por la Junta de Supervisores, aprobó un gran número de solicitudes para cambiar el mapa del plan y rezonificó más de 10.000 acres para permitir el desarrollo de una variedad de parcelas de entre 5 y 10 acres (Bridge, 1995). Muchas de estas decisiones se tomaron sin tener en cuenta apenas o nada la opinión pública, lo que generó disconformidad entre los grupos que buscaban un control del crecimiento. En enero de 1996, debido a las duras críticas por parte de los conservacionistas, la Junta de Supervisores adoptó el ya bastante debilitado plan, en una votación con el resultado de cuatro votos a favor y uno en contra.

Como era de esperar, aquellos que buscaban preservar los paisajes rurales del condado por razones ambientales, de ocio o de estilo de vida acudieron a los tribunales. Mediante una demanda judicial, en 1996 un grupo de control del crecimiento llamado Taxpayers for Quality Growth (Contribuyentes a favor del crecimiento de calidad), en colaboración con otras coaliciones ciudadanas, grupos vecinales, el Club Sierra y el vecino condado de Alpine, argumentaron que el plan había violado la Ley de Calidad Ambiental de California por no analizar adecuadamente el impacto que tenía el crecimiento en el tráfico y en el paisaje, y no tener en cuenta otras alternativas. El Tribunal Superior de Sacramento estuvo de acuerdo y, mediante el rechazo del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Plan General, impidió que el condado aprobara nuevos proyectos de desarrollo hasta que se terminaran el nuevo plan y el IIA.

Los opositores también acudieron a las urnas en busca de una solución más permanente. Las medidas anticrecimiento fracasaron por un estrecho margen en 1996 y 1998, mientras que las iniciativas que simplemente proponían poner un tope de población y buscaban condicionar el desarrollo a la disponibilidad de agua no lograron suficiente apoyo; al final, fue el tráfico de vehículos lo que acabó por llevar a los votantes de El Dorado a apoyar las restricciones al desarrollo. Los atascos, un aspecto generalmente odiado

del crecimiento exurbano, reducen de manera directa la calidad de vida y el sentido de vivir en una zona rural aislada lejos de las preocupaciones de la ciudad. En noviembre de 1998 una gran mayoría de votantes aprobó la Medida Y, la Iniciativa para el Control de la Congestión del Tráfico. Esta medida requería que los promotores pagaran el total de las mejoras en una carretera en caso de que un proyecto fuese la causa de que esta pasase a formar parte de las más congestionadas del estado.

Tras otras polémicas elecciones, a principios del siglo XXI la Junta de Supervisores se decidió a elegir por segunda vez el plan de 1996 como la "alternativa preferida" para un nuevo IIA con un mejor análisis. A pesar de las continuas objeciones por parte de grupos opositores, en 2004 los supervisores adoptaron el nuevo plan general y el IIA. El desarrollo del condado continuó y las medidas de control de tráfico limitaron el crecimiento solo de forma muy modesta.

Este ciclo polémico y altamente antagónico de litigios y contiendas políticas se basó principalmente en el temor a los efectos del crecimiento. Hizo poco para favorecer cualquier visión positiva del futuro crecimiento del condado y nada por encontrar soluciones a los desafíos políticos, ambientales y sociales del mismo. El resultado fue un crecimiento residencial continuado de baja densidad de población y de formas dispersas capaces de producir los mayores impactos a largo plazo. Sin embargo, los ecologistas han visto algunos atisbos de progreso. Entre los que se halla la implantación en 2008 de un Plan de Gestión de los Robledales, un documento que tiene como objetivo desarrollar una visión positiva de la restauración ecológica; aunque los grupos conservacionistas lo vieron como una medida demasiado débil y, sin éxito, intentaron reforzar recurriendo a los tribunales. La segunda iniciativa, más prometedora, fue crear un Plan de Gestión de Recursos Naturales Integrados. Sus defensores esperan que, con el tiempo, ayude a preservar las áreas vitales para los hábitats de vida salvaje y la regeneración de las cuencas hidrográficas. Sorprendentemente, el discurso que dio lugar a estos documentos se centró en fomentar la sostenibilidad ambiental, mientras que en el pasado el debate sobre el paisaje de El Dorado se había centrado en la protección de la estética y la identidad rural contra las amenazas del desarrollo. Estos esfuerzos representan un enfoque de

planificación más proactivo. Sin embargo, es probable que ni el desarrollo ni las regulaciones de planeamiento conduzcan al condado hacia la sostenibilidad, puesto que ninguno aborda los marcos estructurales y culturales que han producido el escenario exurbano de El Dorado.

Temas recurrentes en las políticas del paisaje del condado de el Dorado

La historia de la planificación urbanística en el condado de El Dorado ilustra una serie de temas que parecen ser comunes en todas las zonas exurbanas de Estados Unidos y que tanto los urbanistas como los investigadores deberán abordar para proteger mejor los paisajes y los ecosistemas. En concreto, el condado experimentó una transición, en palabras de Wood, de una "política rural" a una "política de lo rural" (Wood, 2005). Si bien muchos cargos electos adoptaron la retórica de la ruralidad en términos de preservar el carácter y los estilos de vida rurales, en la práctica se pusieron del lado de los promotores que buscaban capitalizar ese ideal rural mediante la construcción de miles de viviendas. Impulsados por un gran sentimiento de pérdida, amenaza y miedo, los detractores, incluidos algunos exurbanitas que habían podido cambiar su estatus de "recién llegados" a "lugareños", reafirmaron su derecho a proteger el paisaje utilizando los medios que fueran necesarios. Los representantes políticos ignoraron las preocupaciones y opiniones de los residentes, y estos reaccionaron con duros mecanismos, incluidas demandas judiciales y ataques de ira en actos públicos. Así pues, las políticas urbanas del condado se convirtieron en una frecuente lucha desesperada por preservar las supuestas características de la ruralidad.

Sin embargo, es importante evitar el enfoque simplista utilizado por Duane (1999) en su análisis de la política del paisaje del condado de Nevada: el de una máquina de crecimiento conservador movida por los negocios y motivada solo por el valor de mercado, a la que se opone una impulsada por el consenso de la ciudadanía que parece poseer únicamente la capacidad de identificar "valores de uso". Según Duane, este es un escenario clásico de "máquina de crecimiento" (Molotch, 1976): una batalla entre un Goliat destructivo y derrochador formado por conservadores políticos,

industrias, constructores y medios de comunicación locales, que atiende a las necesidades de aquellos egoístas que huyen de los suburbios de la ciudad, y un David justo, integrado por un número menor de ecologistas. Este análisis no tiene en cuenta que muchos ecologistas y defensores del control del crecimiento son exurbanitas, o hijos de exurbanitas, y también responsables de algunos de los efectos del crecimiento. Una de las principales paradojas del sentimiento anticrecimiento en El Dorado es que la prevención del desarrollo suburbano a menudo permite la subdivisión y el desarrollo continuo y fragmentado en forma de expansión rural, en lugar de limitar de manera potencial este desarrollo a áreas específicas. Se trata de un tema que a menudo se olvida en los debates sobre las luchas políticas sobre los escenarios exurbanos.

También es importante comprender la complejidad de los sentimientos de pérdida, amenaza y miedo que atraviesan los diálogos políticos y personales en las zonas exurbanas. La ansiedad de los residentes exurbanos estaba asociada al sentimiento de "pérdida" del paisaje, según señalan Spectorsky (1955), Marx (1964) y Williams (1973) y estudios recientes (p.ej., Duncan y Duncan, 2004; Kosek, 2006). Tales sentimientos son especialmente fuertes entre aquellos que se acaban de mudar buscando esos paisajes. A medida que el crecimiento del condado de El Dorado comenzó a acelerarse en la década de los ochenta, los artículos de prensa estaban llenos de citas, incluida la de un hombre que había construido la "casa de sus sueños" en cinco acres en el oeste del condado de El Dorado: "Donde quiera que mire, estoy amenazado" (Terhaar, 1989). Uno de los entrevistados comentó que ya no veía "colinas ondulantes y pastizales, con las luces de Sacramento a lo lejos". Otros hablaban de una "calidad de vida" intangible disminuida con la llegada de los nuevos foráneos.

Dichas preocupaciones se pusieron de manifiesto cuando se empezó a reclamar la posesión exclusiva no solo de la tierra, sino de la propia idea de paisaje, con que se reivindicaba una "propiedad" colectiva que está limitada, no de manera explícita, pero sí implícitamente, a un grupo de personas. Un ejemplo de este sentimiento son los eslóganes de la campaña electoral de dos candidatos a supervisores en junio de 2010: "Manténgase rurales" y "Preserven *nuestro* estilo de vida rural" (subrayado propio). El uso del

posesivo implica que el "estilo de vida rural" es algo que solo pertenece a los ya residentes. Esta exclusividad adquiere fácilmente matices raciales y de clase. Un agente inmobiliario con el que hablamos señaló hasta qué punto los exurbanitas "quieren mantener unida a la tribu". Otro entrevistado, propietario de un negocio local, comparó las urbanizaciones con mayor densidad de población en el condado de El Dorado con las secciones "más castigadas" de la región de Sacramento, habitadas por personas de color con las rentas más bajas. Estas actitudes no nos sorprenden, ya que, desde los años cuarenta es la forma en que las inmobiliarias han promocionado y vendido El Dorado (cf. Cámara de Comercio de El Dorado, 1946).

El miedo al otro a menudo se representa como un miedo a la urbanidad o a la "suburbanidad". Estos temores pueden hacer referencia a un paisaje amenazador, en general, o a un lugar amenazador concreto, en algún otro lugar de California, por lo regular. Por ejemplo, un habitante de Shingle Springs, que se había mudado allí en 1979, en 1989 se quejó a un reportero del *Sacramento Bee* de que "esto se está convirtiendo en un pequeño suburbio". En 1996 el inspector del condado, John Wolfenden, advirtió sobre la situación al sur de California: "A la gente ya no le va a gustar más esto que el condado de Orange, que es de donde procede mucha de la gente que vive aquí" (en Hoge, 1995). Otro residente hizo referencia al desarrollo de Silicon Valley: "Me estremezco al pensar que el condado de el Dorado podría convertirse en otro condado de Santa Clara en los próximos veinte años". Este tipo de avisos suelen tener un gran éxito a la hora favorecer la oposición al crecimiento, siendo el crecimiento a menudo asociado con cualquier tipo de planificación de los usos del suelo.

La retórica local también suele basarse en la defensa del nativismo. En 1993 el inspector de planificación urbana Tom Mahach comentó que la visión del borrador de Sedway Cook del plan general representaba "un enfoque europeo del uso de la tierra ajeno a la preferencia estadounidense por un 'estilo de vida rural'" (Bridge, 1993a). Posteriormente, Mahach acusó al equipo de planificación urbana del condado de tratar de mantener el crecimiento de la población en "pueblos de estilo europeo rodeados de cinturones verdes" (Bridge, 1995). Este punto de vista parece entender el paisaje del condado como una extensión no regulada relativamente salvaje y libre del orden impuesto

desde fuera. Sin duda, esta actitud implica miedo al liberalismo, al socialismo y al multiculturalismo. No es sorprendente que a día de hoy el condado de el Dorado albergue el potente movimiento Tea Party, que en 2011 presionó a la Junta de Supervisores para que abstuviese de participar en las tareas de planificación regional de las "Comunidades Sostenibles" financiadas con fondos federales por el Consejo de Gobiernos del Área de Sacramento. Los opositores se refirieron a ello como una abdicación de la autoridad local y vincularon dichos esfuerzos de planificación regional con el acuerdo de la Agenda 21 de las Naciones Unidas. Un supervisor que votó en contra de la participación habló en un acto público sobre "perder nuestra identidad por la regionalización". Uno de los dos supervisores que votaron a favor de la participación en los estudios incluso defendió su postura con una retórica radicalmente nativista. "Temo lo que nos harán si no estamos allí", dijo (en Daley, 2011).

Es fácil ser cínico con tales actitudes, pero, por lo general, demostraron sinceridad a lo largo de nuestras entrevistas e investigación. La consecuencia es que los ecologistas políticos y los planificadores urbanos deben dedicar más tiempo a comprender cómo se desarrollan y manifiestan el miedo y la sensación de impotencia tanto en la política del paisaje exurbano como en la política, en general.

El resultado de tales eventos en el plano de la política ha sido una paralización de los procesos e instituciones de planificación urbana. Desde que se estableció el departamento de planificación urbana del condado, el personal se ha quejado de estar sobrecargado de trabajo o insuficientemente empoderado. Varios informantes señalaron que El Dorado ha sido un lugar donde suelen ir los planificadores novatos a buscar su primer trabajo, pero en el que pocos permanecen por mucho tiempo. Se podría argumentar que la falta de experiencia, autoridad y financiación en el Departamento de Planificación Urbana es el resultado de un condado "rural" que simplemente no entendió la necesidad del planeamiento, pero el debilitamiento de la estructura de planificación local parece deberse a algo más sistemático. El personal se ve atacado por todos los frentes y atrapado en medio de las múltiples maneras de entender el paisaje, mientras casi todo el mundo les acusa de conspiración, ignorancia, incompetencia o desorientación. Las consecuencias son, según varios de los entrevistados, que todas las

partes intentan deslegitimar y, por tanto, paralizar cualquier potencial planificación urbana, en especial cuando esta no sirve a sus intereses. Dicha paralización del Gobierno es una característica clave del neoliberalismo del cambio de milenio, en general, que destaca la menor intervención del Estado en la sociedad (Larner, 2003; McCarthy, 2002; 2005).

Ecología política y el problema del escenario exurbano

En la mayoría de los conflictos por la planificación del paisaje, los temas que no se discuten (como el impacto del capitalismo global y la economía política en las sociedades locales) son, al menos, tan importantes como los que salen a relucir en las reuniones y en los medios de comunicación locales. Esto ocurre en particular en escenarios exurbanos como el condado de El Dorado. Los conflictos locales están enmarcados y condicionados por contextos político-económicos, culturales, geográficos y ecológicos más amplios. Las batallas en la planificación urbana y la retórica sobre el crecimiento en el condado de El Dorado —en audiencias públicas, en los tribunales, en los editoriales de los periódicos y en las urnas— se pueden ver como los escenarios locales para una producción más extensa, movimiento de capital y poder que actúa como dramaturgo y, con demasiada frecuencia, como director. Comenzando con la fiebre del oro del siglo xix, las progresivas fuerzas del capital han impulsado el auge y el posterior declive de los sectores agrícolas y de extracción de recursos del condado (Brechin, 1999; Walker, 2004). En los últimos tiempos, los promotores, en su mayoría foráneos, se han beneficiado del valor recreativo y del estilo de vida del condado; mientras que los cambios en los patrones de inversión y empleo durante el siglo XX permitieron a los trabajadores profesionales y ejecutivos alejarse más de la ciudad y les dieron dinero para comprar importantes extensiones de tierra que alguna vez habrían sido dominios de agricultores o de las personas más adineradas.

Asimismo, los conflictos de planificación en las zonas periféricas excluyen, con frecuencia, a quienes no tienen quién les represente. Se trata de gente que no posee la suficiente voluntad o capacidad para organizarse o hacer uso de las herramientas de la política del paisaje, ya sea para

elegir supervisores que simpaticen con la causa, para denunciar aquellas decisiones que les sean desfavorables o para llevar a cabo con éxito una campaña electoral. Algunas de estas personas son residentes desde hace mucho tiempo, incluidos los habitantes más pobres de zonas que aún dependen de la agricultura y la silvicultura. Estos individuos apenas los mencionamos en nuestras entrevistas, excepto cuando se incluyen en los debates sobre el estilo de vida agrícola ideal. Sus *intereses* no suelen ser tenidos en consideración en los conflictos mencionados. De hecho, muchos entrevistados describieron cómo las potenciales alianzas entre los grupos de agricultores y aquellos en contra del crecimiento se frustraron debido, en gran parte, a la desconfianza y a las diferencias ideológicas. Los intereses a favor del crecimiento se aprovecharon de esta división y pudieron evitar que los agricultores y los ecologistas llegaran a un acuerdo que fortaleciera sus posturas.

En la mayor parte de nuestras entrevistas, así como en los documentos de planificación urbana y en los informes de prensa, no se ha tenido en cuenta a las personas con ingresos más bajos que trabajan en los restaurantes, centros comerciales y gasolineras del condado de El Dorado, una parte vive en el condado y se desplaza a diario desde otros lugares. En los debates sobre cómo "debería" ser el paisaje del condado, pocos participantes mencionaron los servicios que una comunidad debería brindar a sus residentes, sobre todo, aquellos que se encuentran a las afueras. Esta ausencia es evidente, en especial en el contexto racializado de la "pureza" del paisaje y de quién "pertenece" a la comunidad. A pesar de que la ley de California exige que el plan general del condado incluya un capítulo dedicado a la vivienda, con el objetivo de que la planificación urbana tenga en cuenta "las necesidades de todos los grupos económicos de la comunidad", los intereses y las opiniones de quienes dependen del modelo no exurbano para vivir y trabajar no aparecen en el discurso de planeamiento público.

Otro elemento que tampoco ha sido tenido en cuenta es la salud de la tierra, aunque quizá en menor medida. Pese a ser un tema que pasa inadvertido, el desarrollo exurbano ha contribuido a una degradación significativa del hábitat, la calidad del aire, la disponibilidad y calidad del agua y muchas otras funciones ecológicas en el condado de El Dorado. Sin embargo, aunque

hubo casos en los que los grupos anticrecimiento utilizaron la retórica de cómo el crecimiento afecta el ambiente natural, acabó por subordinarse a los argumentos acerca de la "ruralidad", el estilo de vida y el tráfico. Esto se hace manifiesto en un apartado del Plan General de 2004: "Un plan de crecimiento controlado y grandes carreteras; un plan para los barrios de calidad y para disminuir el tráfico". En ninguna parte de dicha sección se menciona qué papel debe tener la calidad y salud ambiental.

Lo más lamentable es que en el contexto político ecológico del condado de El Dorado, no ha surgido ninguna organización o grupo de personas con ideas de cómo el paisaje y la población local podrían trabajar juntos de manera sostenible, equitativa y armoniosa. La falta de una visión ecológica completa es común a muchos escenarios de planificación urbana de California y de otras zonas más alejadas, entre las que se incluyen las áreas urbanas (cf. Ryan *et al*., 2004 para una discusión de dinámicas similares que están en juego en el condado de Ventura y en la región metropolitana de Los Ángeles). Pero su omisión en un contexto exurbano es aún más llamativa y desafortunada; en parte, porque un lugar como El Dorado todavía tiene un importante hábitat y está a tiempo de preservar la integridad de los ecosistemas que se encuentran amenazados, y en parte porque la política del paisaje se basa en nociones muy problemáticas y construidas de "ruralidad" y de servicios. Como límite cada vez más borroso de la región metropolitana, el escenario exurbano, en tanto que contexto en el que el ser humano lucha por encontrar el equilibrio entre el desarrollo y la conservación, posee un enorme potencial que no ha sido tenido en cuenta por las políticas del paisaje en el condado de El Dorado. Por tanto, se ha perdido la oportunidad de visualizar y perseguir lo que podríamos denominar un futuro "posexurbano" del condado, ecológica y socialmente hablando.

Hacia un condado de El Dorado "posexurbano"

Durante décadas la política del paisaje exurbano no ha satisfecho a nadie. La trayectoria de desarrollo del condado quizá se ha ralentizado un poco, pero no se ha redirigido. Si bien los grupos que se oponen al crecimiento han conseguido retrasar muchos proyectos a gran escala, no ha brotado ningún

discurso que afirme que la gestión del paisaje no debería basarse en generar riqueza y servir a sus residentes. O, en su lugar, abogar por una visión holística de la sostenibilidad ecológica o la igualdad social. Hacer eso requeriría comprender y responder a los temores de los habitantes de manera colaborativa y respetuosa (Healey, 2006).

Lo ideal sería que los planificadores urbanos interviniesen en los procesos de exurbanización lo antes posible, para prevenir la ira de los residentes al sentirse indefensos ante el desarrollo. Esto uniría a los habitantes más antiguos y a los nuevos, ayudaría a que todas las partes se sintieran más cómodas entre sí, favorecería el conocimiento y la comprensión, y debilitaría la construcción de imaginarios antagónicos para favorecer que todos se centrasen en lo que más preocupa (tráfico, ruido, calidad medioambiental, etc.), en vez de en quién es el malo de la película (promotores, ecologistas, habitantes del condado de Orange). De esta forma, los problemas se enmarcarían en función de las múltiples perspectivas (globales, regionales, locales) y se rompería así con el nativismo provincial, sin perder de vista que lo más importante son los valores, necesidades e ideas de la población local, para evitar que los actores principales vean la planificación urbana como un trabajo ajeno a ellos. Como poco, esto ayudaría a que todas las partes se sintieran escuchadas y a que la toma de decisiones fuese más transparente, a fin de evitar la ira y la desconfianza extremas que han surgido entre la población autóctona. Asimismo, los planificadores urbanos harían un esfuerzo explícito por llegar a aquellas poblaciones que por lo regular no son tenidas en consideración en los debates sobre la planificación.

En dicha situación, los planificadores urbanos también contarían con los promotores privados a la hora de determinar la viabilidad de un enfoque más gestionado y ecológicamente racional, destacando ejemplos de desarrollo que son comercializables, pero que respetan los valores locales y ecológicos. Aunque algunos constructores tendrían dificultades para adaptarse a tales miradas, otros diseñadores más innovadores (ya sean lugareños o no) podrían llenar ese vacío. En el condado de El Dorado, el famoso centro comercial El Dorado Hills (Figura 4), que se terminó de construir en 2009 y que se diseñó con la intención de recrear y parecerse

a un pueblo italiano, muestra cierta aceptación de la población de los vecindarios transitables de uso mixto. Tiene muchos defectos; entre ellos, el hecho de que solo se puede llegar a él en automóvil y que, debido a los estándares de zonificación actuales, nunca se pensase en hacer uso residencial de la parte superior de las tiendas del centro comercial (como ocurriría realmente en un pueblo italiano), pese a que las ventanas falsas dan la impresión de que las viviendas están en el primer piso. De hecho, un informante, un planificador local, se rió cuando le preguntamos si alguna vez se había considerado el uso residencial como una posibilidad. No obstante, si el condado utilizase ejemplos como el de este centro comercial para involucrar más a la población local y a los empresarios, se podría desarrollar un debate más proactivo, inclusivo y colaborativo. Y tal vez así pudiese surgir otra perspectiva para el futuro del condado.

Figura 4. El Centro Comercial El Dorado Hills da ciertas pautas sobre cómo podrían ser otros modelos de desarrollo en el condado de El Dorado. Foto: Craig Beebe.



Incluso si hubiera habido planificadores innovadores trabajando en el condado de El Dorado durante el periodo analizado, es probable que no hubieran llegado muy lejos en sus intentos de generar consenso. Las fuerzas opositoras son simplemente demasiado fuertes y no parecen estar interesadas en comprometerse. El condado se encontraba en una encrucijada entre las presiones externas para el desarrollo urbano, los valores del conservadurismo interno y a favor de los derechos de propiedad, y la debilidad de las instituciones del sector público. También se veía envuelto en un discurso social simplista que representa el desarrollo como una elección entre trabajos, desarrollo económico y libertad personal, por un lado, y protección ambiental, estancamiento económico e intrusión gubernamental, por el otro. En los debates sobre el crecimiento residencial, los constructores argumentaron que solo ciertos tipos de desarrollo serían rentables y se posicionan como meras víctimas de las fuerzas del mercado, una postura que a menudo los cargos electos del condado estaban dispuestos a aceptar. Todas estas dinámicas dificultaron una planificación efectiva y no será fácil cambiarlas.

Dado que la gestión del crecimiento es casi imposible en el contexto ecológico político local, el enfoque común ha sido moverse en niveles gubernamentales superiores, intentando utilizarlos para impulsar la acción local (Self, 1982). Ya que, por lo general, los Gobiernos federal y estatal de Estados Unidos no han estado interesados en cuestiones de planificación del uso del suelo, a menudo esto ha significado buscar soluciones regionales (Daniels, 1999: 185; Duane, 1999; Wheeler, 2000; 2002). Este enfoque puede ser prometedor para el condado de El Dorado. El condado y sus ciudades son miembros del Consejo de Gobiernos del Área de Sacramento (CGDAS),[12] un organismo de planificación regional que también incluye otros cuatro condados cercanos. El cgdas es bien conocido por haber dirigido en 2004 el primer Proyecto de Gestión del Crecimiento Regional de California, una mirada regional de crecimiento compacto, inteligente (SACOG 2004). Si bien es opcional para las jurisdicciones locales, el proyecto ha tenido una gran influencia en la configuración de la línea de crecimiento de la región. Sin embargo, debido a la demanda del plan general que pesaba sobre el condado durante la creación del proyecto, este se

12 N. de T.: Esa sigla (cgdas) sería la traducción de Sacramento Area Council of Governments (SACOG).

retiró de tal innovador proceso de planificación regional, y solo participó la ciudad de Placerville. Esa oportunidad perdida supuso un golpe muy duro para el condado, ya que su plan general, como tantos otros, legisla como si el condado estuviese aislado y no conecta de manera explícita sus decisiones de uso del suelo con las de los barrios vecinos.

El condado de El Dorado participó en un proyecto sobre la planificación regional futura que podría crear una mirada más inclusiva y que describiría cómo se pueden proteger algunos paisajes del crecimiento futuro al concentrarlo en otras áreas. De hecho, las tareas de planificación regional son obligatorias según la SB 375 de California de 2008, una ley que exige que cada región desarrolle una "estrategia de comunidades sostenibles" con una visión integrada del transporte, uso de la tierra y vivienda y que, por medio de modelos de computación, demuestre que es capaz de cumplir con el objetivo de reducir los gei de California. Sin embargo, la puesta en marcha de la ley sb 375 aún se encuentra en las primeras etapas. No está claro qué paquete de incentivos y sanciones se desarrollará para su cumplimiento, y existe una gran oposición a tales conceptos. Esto también es común en otras zonas exurbanas. Incluso en Portland, la región metropolitana de Oregón, muy conocida por su competencia en la planificación regional, la retórica política en algunas comunidades exurbanas periféricas similares que están a la cabeza de un desarrollo más denso ha desafiado directamente la autoridad de Metro, la institución de planificación regional más importante del país (Walker y Hurley 2011). Ha habido una gran oposición a cualquier tipo de planificación del uso del suelo, acusándola de ser una abrogación de los derechos de propiedad e incluso una trama global que busca subsumir la Constitución de Estados Unidos en mandatos globales como la Agenda 21 (Kaufman y Zernike, 2012). Claramente, el desafío para la regulación del crecimiento y sus impactos es severo, y es probable que solo un marco integrado de planificación que engloba niveles superiores de gobierno (federal, estatal o regional) sea tan fuerte para cambiar el entorno de planificación urbana en las zonas exurbanas de Estados Unidos.

Sin duda alguna, el proceso de exurbanización ha transformado el oeste del país. La legislación laxa ha permitido que la creación de carreteras, embalses, tendidos eléctricos y conexiones de internet, así como a el

deseo público de un estilo de vida "rural" y la descentralización continua de puestos de trabajo haya llevado un desarrollo de baja densidad de población a los bosques, desiertos y laderas de la nación. Como hemos demostrado, esto ha tenido un duro impacto y de gran alcance en las ecologías y economías políticas.

Para que lugares como el condado de el Dorado se desarrollen de una forma más sostenible, debe partirse de una mayor consciencia de cómo la ciudad y el campo se han desarrollado juntos como construcciones culturales (Williams, 1973), y de las posibles direcciones que esto podría tomar en el futuro. Un análisis desde la ecología política, que atiende a las capas entretejidas de poder, naturaleza, capital y clase, proporciona una lente excelente a través de la cual comprender cómo estas construcciones han contribuido al conflicto y a comprender los procesos de degradación o mitigación ecológica en una variedad de comunidades humanas que van desde lo urbano (Byrne *et al*., 2007) hasta lo exurbano y rural.

La tarea ahora es traducir dichos análisis en un nuevo camino para los escenarios exurbanos. Algunas directrices han asustado a muchos residentes exurbanos, ya que parecen implicar un aumento del tráfico en las carreteras, la expansión de franjas comerciales y el aumento de paisajes residenciales. Pero también son posibles otras miradas más positivas, como la restauración de las cuencas hidrográficas, la conservación de espacios abiertos y la creación de comunidades más compactas, equilibradas y diversas. Los planificadores urbanos y los grupos progresistas deberán hacer todo lo posible para fomentar el compromiso por un futuro alternativo que pueda inspirar, en lugar de asustar y enfurecer. Para lograr esto, también se necesitará el apoyo del Gobierno en un nivel superior. Se estima que California seguirá creciendo durante los próximos veinte años, pero el reto es, como dijo una de las personas que entrevistamos, "crecer con gracia". Tal desafío requiere respeto, diálogo y conocimiento de cómo se ha llegado a este punto y de qué estrategias se han de desarrollar para tomar otro rumbo. Este es el punto de partida si se quiere vislumbrar un futuro posexurbano para lugares como el condado de El Dorado.

Referencias

Berube, A., A. Singer, H. Wilson y W. H. Frey. (2006). *Finding exurbia: America's fastest-growing communities at the metropolitan fringe*. Brookings Institution.

Blaikie, P. y H. Brookfield. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.

Brechin, G. A. (1999). *Imperial San Francisco: urban power, earthly ruin*. University of California Press.

Bridge, C. (1993a, 4 de noviembre). El Dorado planners get earful: two views emerge during growth hearing. *Sacramento Bee*, p. N1.

Bridge, C. (1993b, 11 de noviembre). Plans to go on '94 ballot: El Dorado board eyes advisory vote on General Plan. *Sacramento Bee*, p. N1.

Bridge, C. (1995, 21 de septiembre). Complaints rise on draft General Plan changes. *Sacramento Bee*, p. N1.

Brown, D. G., K. M. Johnson, T. R. Loveland y D. M. Theobald. (2005). Rural land-use trends in the coterminous United States 1950-2000. *Ecological Applications*, *15*, 1851-1863.

Byrne, J., M. Kendrick y D. Sroaf. (2007). The park made of oil: towards a historical political ecology of the Kenneth Han State Recreation Area. *Local Environment*, *12*, 153-181.

Cámara de Comercio de El Dorado. (1946). *El Dorado County, California: history-industry-recreation*. Old Hangtown Press.

Clark, J. K., R. McChesney, D. K. Munroe y E. G. Irwin. (2009). Spatial characteristics of exurban settlement pattern in the United States. *Landscape and Urban Planning*, *90*, 178-188.

Cloke, P. y J. Little. (1997). *Contested countryside cultures: otherness, marginalization, and rurality*. Routledge.

Crump, J. R. (2003). Finding a place in the country: exurban and suburban development in Sonoma County, California. *Environment and Behavior*, *35*, 187-202.

Daley, C. (2011, 16 de junio). Supes refuse to participate in regionals study. *Mountain Democrat*.

Daniels, T. (1999). *When city and country collide: managing growth at the metropolitan fringe*. Island Press.

Davis, J. S. y A. C. Nelson. (1994). The new "burbs": the exurbs and their implications for planning policy. *Journal of the American Planning Association*, *60*, 5-60.

Duane, T. (1999). *Shaping the Sierra: nature, culture, and conflict in the changing West*. University of California Press.

Duncan, J. S. y N. Duncan. (2004). *Landscapes of privilege: The politics of the aesthetic in an American suburb*. Routledge.

El Dorado County Chamber of Commerce. 1946. El Dorado County, California: History-industry-recreation. Placerville: Old Hangtown Press.

El Dorado County Planning Department. 1963. Six years of planning in El Dorado County. Placerville: El Dorado County.

El Dorado County Planning Department. 1977. Pleasant Valley-Oak Hill-Sly Park area plan and environmental impact report. Placerville: El Dorado County.

El Dorado County Planning Department. 1981. The long range land use plan: A guide to the year 2000. Placerville: El Dorado County.

El Dorado County Planning Department. 2004. El Dorado County General Plan: A plan for managed growth and open roads; a plan for quality neighborhoods and traffic relief. Placerville: El Dorado County.

Engellenner, J. (1992, 16 de octubre). Growth emerges as number one issue in 3 El Dorado Supervisor races. *Sacramento Bee*, B1.

Engellenner, J. (1993, 30 de julio). Draft plan for El Dorado's future takes heat. *Sacramento Bee*, B1.

Friedmann, J. y J. Miller. (1965). The urban field. *Journal of the American Institute of Planners*, *31*, 312-320.

Halfacree, K. H. (1997). Contrasting roles for the post-productivist countryside: a postmodern perspective on counterurbanization. En P. Cloke y J. Little (eds.), *Contested countryside cultures: otherness, marginalization, and rurality* (70-93). Routledge.

Hayden, D. (2003). *Building suburbia: green fields and urban growth 1820-2000*. Pantheon.

Healey, P. (2006). *Collaborative planning: shaping places in fragmented societies*. Palgrave Macmillan.

Hoge, P. (1995, 22 de diciembre). Plan advances in El Dorado-doubles population by 2030. *Sacramento Bee*, p. B1.

Holliday, J. S. (1981). *The world rushed in: the California Gold Rush experience*. Simon & Schuster.

Hurley, P. T. y P. A. Walker. (2004). Whose vision? Conspiracy theory and land-use planning in Nevada County, California. *Environment and Behavior A*, *36*, 1529-1547.

Johnson, B. E. (2008). Nature, affordability, and privacy as motivations for exurban living. *Urban Geography*, *29*, 705-723.

Kaufman, L. y K. Zernike. (2012, 3 de febrero). Activists fight green projects, seeing U.N. plot. *The New York Times* [en línea]. http://www.nytimes.com/2012/02/04/us/activists-fight-green-projects-seeing-un-plot.html

Kinetz, M. (1993, 24 de octubre). Supervisors tire of "civil war": board will try to reach truce Tuesday on General Plan process. *Sacramento Bee*, p. N3.

Kosek, J. (2006). *Understories: the political life of forests in Northern New Mexico*. Duke University Press.

Lambert, M. (1987, 4 de enero). Developers are heading for the hills: Community in El Dorado faces explosion of new homes. *Sacramento Bee*, p. A1.

Lambert, M. (1989, 25 de marzo). Urban growth crowds rural dreams: El Dorado County residents fear open spaces are disappearing. *Sacramento Bee*, B1.

Larner, W. (2003). Neoliberalism? *Environment and Planning D: Society and Space*, *21*, 509-512.

Locus: Responsible Real Estate Developers and Investors. (2012). *Homepage*. http://www.smartgrowthamerica.org/locus

Lundstrom, M. (2009, 3 de mayo). Sawmill layoffs topple a way of life. *Sacramento Bee*, A1.

Marx, L. (1964). *The machine in the garden*. Oxford University Press.

McCarthy, J. (2002). First world political ecology: lessons from the Wise Use movement. *Environment and Planning A*, *34*, 1281-1302.

McCarthy, J. (2005). Devolution in the woods: community forestry as hybrid neoliberalism. *Environment and Planning A*, *37*, 995-1014.

Molotch, H. (1976). The city as growth machine: toward a sociology of place. *American Journal of Sociology*, *82*, 309-330.

Moore Iacofano Goltsman. (1990). *Summary of comments: round 1 community workshops; El Dorado County 2010 General Plan*. MIG.

Moore Iacofano Goltsman. (1992). *Summary of comments: round III community workshops*. MIG.

Mumford, L. (1961). *The city in history: its origins, its transformations, and its prospects*. Harcourt, Brace & World.

Nelson, A. C. y T. W. Sanchez. (1999). Debunking the exurban myth: a comparison of suburban households. *Housing Policy Debate*, *10*, 689-709.

Odell, E. A., D. M. Theobald y R. L. Knight. (2003). Incorporating ecology into land use planning: the songbird's case for clustered development. *Journal of the American Planning Association*, *69*, 72-82.

Paulson, S., L. L. Gezon y M. Watts. (2005). Politics, ecologies, genealogies. En S. Paulson y L. L. Gezon (eds.), *Political ecology across spaces, scales, and social groups* (pp. 17-40). Rutgers University Press.

Peterson, M. N., X. Chen y J. Lin. (2008). Household location choices: implications for biodiversity. *Conservation Biology*, *22*, 912-921.

Planning Associates. 1966. Summary report: El Dorado County preliminary General Plan. San Francisco: Planning Associates.

Reps, J.W. 1979. Cities of the American West: a history of frontier urban planning. Princeton: Princeton University Press.

Robbins, P. 2004. Political ecology: a critical introduction. Malden, MA: Blackwell.

Robbins, P. 2007. Lawn people: how grasses, weeds, and chemicals make us who we are. Philadelphia: Temple University Press.

Rose, U. 1992, May 24. Growth issue splits District 3 Supervisor candidates. Sacramento Bee, N2.

Ryan, C.M., J.P. Wilson and W. Fulton. Living on the edge: growth policy choices for Ventura County. In J. Wolch, M. Pastor and P. Dreier (eds.) Up against the sprawl: public policy and the making of southern California. Minneapolis: University of Minnesota Press, 309-342.

Sacramento Area Council of Governments. 2004. Sacramento regional blueprint. Sacramento: SACOG.

Sedway Cooke Associates. 1992. Draft El Dorado County policy framework. San Francisco: Sedway Cooke Associates.

Self, P. 1982. Planning the urban region: a comparative study of policies and organizations. London: George Allen & Unwin.

Spectorsky, A.C. 1955. The exurbanites. Philadelphia: Lippincott.

Swett, C. 1994, May 7. Sale rescues Camino lumber mill. Sacramento Bee, E8.

Terhaar, J. 1989, December 3. El Dorado braces for explosive growth. Sacramento Bee, F1.

Theobald, D.M., J.R. Miller and N.T. Hobbs. 1997. Estimating the cumulative effects of development on wildlife habitat. Landscape and Urban Planning 39: 25-36.

Travis, W.R. 2007. New geographies of the American West: land use and the changing patterns of place. Washington, DC: Island Press.

Vance, J.E. 1972. California and the search for the ideal. Annals of the Association of American Geographers 62: 185-210.

Vistica, G. 1989, December 2. El Dorado may hit the brakes on growth for two years. Sacramento Bee, B5.

Vistica G. 1990, January 7. Planning staff growing tired in El Dorado. Sacramento Bee, B3.

Walker, P.A. 2003. Reconsidering "regional" political ecologies: toward a political ecology of the rural American West. Progress in Human Geography 27: 7-24.

Walker, P.A. and L. Fortmann. 2003. Whose landscape? A political ecology of the "exurban" Sierra. Cultural Geographies 10: 469-491.

Walker, P.A. and P.T. Hurley. 2004. Collaboration derailed: the politics of "community- based" resource management in Nevada County, California. Society and Natural Resources 17: 735-751.

Walker, P.A. and P.T. Hurley. 2011. Planning paradise: politics and visioning of land use in Oregon. Tucson: University of Arizona Press.

Walker, R.A. 2004. The conquest of bread: 150 years of agribusiness in California. New York: The New Press. Watts, M. and R. Peet. 2004. Liberating political ecology. In R. Peet and M. Watts (eds.), Liberation ecologies: environment, development, and social movements. New York: Routledge, 3-47.

Wheeler, S.M. 2000. Planning for metropolitan sustainability. Journal of Planning Education and Research 20: 133-145. Wheeler, S.M. 2002. The

new regionalism: Key characteristics of an emerging movement. Journal of the American Planning Association 68: 267-278.

Wheeler, S.M. 2007. The evolution of built landscapes in metropolitan regions. Journal of Planning Education and Research 27: 400-416.

Wheeler, S.M. and C.W. Beebe. 2011. The rise of the postmodern metropolis: spatial evolution of the Sacramento metropolitan region. Journal of Urban Design 16: 307-332.

Williams, R. 1973. The country and the city. New York: Oxford University Press. Woods, M. 2006. Redefining the "rural question": the new 'politics of the rural' and social policy. Social Policy and Administration 40: 579-595.

Woods, M. 2006. Redefining the "rural question": the new 'politics of the rural' and social policy. Social Policy and Administration 40: 579-595.

45. Caminos diabólicos en el desierto y peleas de gatos en el río: una ecología política posthumanista del control fronterizo en la colindancia México-Estados Unidos[1]

Juanita Sundberg

Resumen: Este artículo explica las razones por las que seres no humanos deben considerarse actores de algunos procesos geopolíticos, tales como el trazado y control estricto de fronteras. El reto de esta línea de argumentación es considerar a entes no humanos como actores sin hacer uso de ontologías dualistas que ubiquen a lo natural y lo social en ámbitos separados. Para abordar este reto metodológico, propongo una ecología política poshumanista. Mi argumento y enfoque metodológico se desprenden de mi investigación sobre las dimensiones ambientales de la seguridad fronteriza de Estados Unidos. De manera más específica, examino cómo el desierto, los ríos, el matorral espinoso de Tamaulipas y los felinos vulneran, perturban y obstaculizan las prácticas cotidianas de control de los límites territoriales, y obligan a los actores gubernamentales a solicitar más fondos, infraestructura, más guardias y tecnología de vigilancia. Como muestra mi investigación, considerar seriamente a los no humanos como actores altera los argumentos que se ofrecen para explicar la escalada de las estrategias de control de Estados Unidos.

Palabras clave: control fronterizo, ecología política, poshumanismo, ontologías relacionales, frontera de Estados Unidos-México.

Este artículo pretende abordar a los no humanos como actores de los procesos geopolíticos; actores cuyas características, energías y potencialidades tienen una enorme relevancia en la dinámica política (Robbins, 2003; Hobson, 2007).

1 Publicado originalmente en: Juanita Sundberg, 2011, "Diabolic caminos in the desert ant cat fights on the río: a posthumanist political ecology of boundary enforcement in the United States-Mexico borderlands", *Annals of the Association of American Geographers*, 101(2): 318-336.

Con este propósito, presento un enfoque metodológico que me es útil para demostrar cómo y por qué el control de los límites fronterizos es una práctica "más que humana" (Whatmore, 2002). De esta forma, pretendo contribuir a los llamados recientes para desarrollar "una conceptualización más amplia de cómo se constituye lo político" (Hobson, 2007: 251; cf. England, 2003; Flint, 2003). Este ejercicio promete elaborar nuevas y más complejas explicaciones sobre "cómo (y, por tanto, por qué) el geopoder se implanta en la actualidad" (Thrift, 2000: 380; cf. Dalby, 2007).

El reto de esta línea de argumentación es considerar a los no humanos "sin recurrir a la idea de que [ellos] existen 'en sí mismos'" (Castree, 2003, p. 208). Este dilema es problemático en particular si, como sucede normalmente, los no humanos en cuestión se consideran como pertenecientes al reino ontológico de la naturaleza opuesto a la sociedad. Abordo este reto metodológico colocando a la ecología política en diálogo con el pensamiento poshumanista para aproximarme a dos cuestiones centrales: la consideración de los no humanos como actores políticos y la (re)conceptualización de la agencia.

Para elaborar este argumento y el enfoque metodológico, parto de mi investigación sobre la ecología política de la seguridad fronteriza de Estados Unidos. En concreto, presento dos situaciones registradas en el trabajo de campo en refugios nacionales de vida silvestre ubicados a lo largo de la frontera sur de Arizona y Texas. Primero me centraré en el sur de Arizona para abordar la cuestión de quién cuenta como actor en la operación de la seguridad fronteriza. Lo hago destacando de qué forma el desierto de Sonora influye, interrumpe y obstruye las prácticas cotidianas de control de las fronteras, y así obliga a los agentes gubernamentales a solicitar más fondos, infraestructura, personal en campo y tecnología. A continuación, me traslado hacia el sur de Texas para aproximarme al problema de la agencia y mostrar cómo dos pequeños felinos se congregan con otros actores y obligan a la Patrulla Fronteriza a modificar las acciones de seguridad fronteriza. Como sugieren estas situaciones, considerar seriamente a los no humanos como actores modifica las explicaciones sobre la escalada de las estrategias estadounidenses para aplicar la ley.

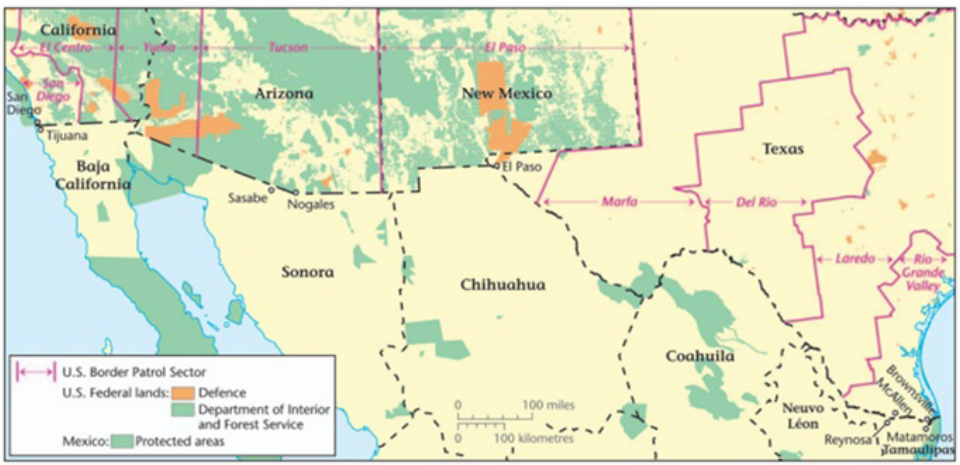
Antes de centrarme en las zonas fronterizas, desarrollaré mi enfoque metodológico para una ecología política poshumanista. A continuación, describo el

contexto empírico de mis estudios de caso y las estrategias que Estados Unidos ha aplicado para hacer valer las leyes fronterizas en los últimos quince años. En la sección final, abordo las ventajas analíticas y políticas que ofrece esta metodología para estudio del control de las fronteras.

De los métodos a la metodología

En 2003, empecé a investigar las dimensiones ambientales del control de la frontera entre México y Estados Unidos, centrándome en la articulación de la seguridad fronteriza con los objetivos de conservación de las zonas protegidas en la frontera de Arizona y Texas. Estas son cuestiones extremadamente importantes, dado que más de 40% de las tierras a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos han sido decretadas por el Gobierno federal como Bosques Nacionales, Parques Nacionales, Monumentos Nacionales, Refugios Nacionales de Vida Silvestre y Reservas Indígenas. De las 1 954 millas que comprende la frontera entre Estados Unidos y México, unas 820 millas lineales corresponden a tierras de propiedad o gestión federal (U.S. Government Accountability Office, 2004: 4; Figura 1).

Figura 1. Mapa de la zona fronteriza entre Estados Unidos y México en el que se muestran los terrenos federales. Cartografía de Eric Leinberger.



Realicé entrevistas semiestructuradas y visitas de campo con encargados de las zonas protegidas de la frontera, así como con los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encargan directamente de las tierras federales y tratan con sus administradores.[2] Dada la variedad de áreas protegidas, cada una con su propio marco legal y su cultura burocrática, limité mi investigación de campo a los refugios nacionales de vida silvestre, a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, una agencia del Departamento del Interior.

Para complementar esta investigación, me entrevisté con el personal de organizaciones no gubernamentales (ong) dedicadas a la conservación de los ecosistemas fronterizos (Frontera Audubon, Defenders of Wildlife, Center for Biological Diversity) y a la protección de los derechos humanos (La Unión del Pueblo Entero, Coalición de Derechos Humanos). Además, realicé entrevistas, asistí a reuniones y trabajé como voluntaria en asociaciones humanitarias que ofrecen ayuda a inmigrantes indocumentados (Humane Borders, No More Deaths, Samaritans). Estas asociaciones operan en tierras públicas del sur de Arizona. En resumen, entrevistar y pasar tiempo en campo con múltiples actores me permitió triangular los datos y comprender los problemas desde perspectivas diversas.

Sin embargo, mis esfuerzos por iniciar una investigación etnográfica sobre cómo los encargados de los terrenos públicos negocian las operaciones para la seguridad fronteriza fueron obstaculizados por funcionarios del Gobierno interesados en restringir el conocimiento público los conflictos actuales y potenciales entre las acciones para el control de la frontera y la protección ambiental en los terrenos públicos asignados por el Gobierno federal. Desarrollé entonces un método alternativo mediante mi colaboración con No Más Muertes (NMD, siglas en inglés), un grupo que proporciona asistencia directa a inmigrantes

2 Me entrevisté con administradores de tierras en seis refugios nacionales de vida silvestre en Texas y Arizona, incluyendo el Refugio Nacional de Vida Silvestre Lower Rio Grande Valley (establecido en 1979), el Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana (establecido en 1943) y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Atascosa (establecido en 1946) en Texas; y en Arizona, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires (creado en 1985), el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta (creado en 1939) y el Refugio Nacional de Vida Silvestre San Bernardino (creado en 1982). Para garantizar el anonimato y la confidencialidad, utilizo el término *administrador de tierras*, con independencia del cargo que ocupe o solo indico el nombre del estado en el que se encuentra.

indocumentados que viajan dentro y en los alrededores del Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires y el Bosque Nacional Coronado al sur de Arizona. En mi papel de voluntaria y etnógrafa, pude observar directamente el trabajo diario de actores de diferentes agencias gubernamentales, lo que complementó y refutó los datos que obtuve por medio de las entrevistas con empleados del Gobierno.[3]

Figura 2. Paisaje al sur del campamento Arivaca de No More Deaths.



Foto de Peter Ragan.

3 No More Deaths (nmd) "es una organización cuya misión es acabar con la muerte y el sufrimiento en la frontera entre Estados Unidos y México, mediante la iniciativa civil" (No More Deaths, 2009). Entre 2005 y 2009, pasé un total de ocho semanas en el campamento de nmd en Arivaca. También pasé aproximadamente dos semanas en El proyecto Nogales de nmd, que colaboró con la Comisión Estatal de Atención a Migrantes de Sonora para atender a los autobuses de deportación y proporcionar a los migrantes retornados comida, agua y primeros auxilios básicos las veinticuatro horas del día. Dado que mi investigación principal no se centra en las experiencias de los migrantes, me mantuve en el papel de voluntaria al interactuar con los migrantes y seguí los protocolos de la nmd. Aunque las experiencias que viví en esos encuentros necesariamente influyen en el análisis que aquí se presenta, no incluyo las voces de los que cruzan la frontera. Para obtener información detallada sobre la experiencia de los inmigrantes al cruzar la frontera, véanse los excelentes trabajos de Nevins (2008) y Urrea (2004).

Al mismo tiempo, y de forma un tanto inesperada, las experiencias con nmd me impulsaron a pasar de preguntarme cómo afecta la seguridad fronteriza a los ecosistemas fronterizos a examinar cómo los actores no humanos —plantas, animales y procesos biofísicos— son constitutivos en la producción de fronteras. De hecho, al caminar en pleno verano por senderos muy frecuentados por migrantes para buscar a personas en peligro y dejar botellas de agua, con temperaturas que por lo regular alcanzan los 43.3 a 46.1 oC, comprobé al nivel más profundo y corpóreo cómo el desierto de Sonora desempeña un papel en la producción de la frontera política y la resiste al mismo tiempo. La inmensidad del paisaje que rodea el campamento de NMD en Arivaca (Figura 2), con sus colinas onduladas, arroyos profundos y agregados enmarañados de mezquites y nopales, hace prácticamente imposible advertir a migrantes indocumentados, ya sea estén en apuros o viajando en grupos de treinta. Si es raro que los voluntarios de nmd se crucen con migrantes en los senderos activos, ¿qué nos dice esto sobre los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense, quienes rara vez se encuentran fuera de sus vehículos deportivos con aire acondicionado. Estas experiencias me obligaron a replantearme cómo la ecología política conceptualiza la agencia de los no humanos.

En lo que sigue, parto de las ideas anteriores para elaborar un enfoque metodológico útil para tratar a los no humanos como actores políticos en los procesos geopolíticos. En mi opinión, una metodología más que humana promete reanimar y alentar el estudio de la producción y el establecimiento de fronteras, admitiendo explicaciones diferentes sobre cómo y por qué se desarrollan estos procesos. Con este fin, mi acercamiento enriquece el pensamiento metodológico de la ecología política con una conceptualización poshumanista de la agencia.

Hacia una ecología política posthumanista

Desde sus inicios, el marco analítico de la ecología política ha evidenciado que "todos los proyectos sociopolíticos son proyectos ecológicos, y viceversa" (Harvey, 1996: 174). El rechazo para separar lo político de lo ecológico ha permitido a los ecólogos políticos ofrecer relatos fehacientes sobre cómo

las prácticas ambientales cotidianas y las relaciones político-económicas se articulan para reconfigurar el mundo (Fairhead y Leach, 1996; Bassett y Zuéli, 2000; para una bibliografía ampliada, Robbins, 2004; Neumann, 2005). Aunque trabajan con enfoques eclécticos y adaptados de manera individual, los ecólogos políticos comparten la comprensión de que las comunidades humanas y no humanas son construcciones contingentes que surgen de una continua interacción (Zimmerer, 1996; Schroeder, 1999; Carney, 2001; Robbins, 2001; 2007; Rocheleau y Roth, 2007). Debido a esto, los ecólogos políticos destacan por narrar las políticas y ecologías de la vida cotidiana en formas que permiten a "los actores no humanos desempeñar un importante papel político en la explicación" (Robbins, 2003: 643).

Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo los no humanos —como entidades y procesos biofísicos— deben ser conceptuados (Hobson, 2007). ¿Pueden comprenderse como componentes de los sistemas ecológicos que los humanos luchan por controlar? ¿O son los no humanos "sujetos cuya ecología, comportamiento y bienestar son implícitos a la desigualdad en los logros sociales y económicos" (Hobson, 2007: 255)? Para responder a estas preguntas y a sus numerosas implicaciones metodológicas, recurro a la teoría poshumanista, que ofrece una sólida reflexión sobre cómo se constituye lo sociopolítico y, por tanto, quién cuenta como actor político y cómo se conforma la agencia. Utilizo el término *poshumanismo* para referirme a una serie de trabajos que pretenden ir más allá de la distinción naturaleza-cultura que ha desempeñado un papel prominente en la geografía (Wolch y Emel, 1998; Philo y Wilbert, 2000; Whatmore, 2002; Haraway, 2003; 2008; Hinchliffe *et al*., 2005; Braun, 2008).[4] En términos generales, estos trabajos proponen un enfoque ontológico relacional que comprende a lo humano y lo no humano como mutuamente constituidos en y por medio de las relaciones sociales (Castree, 2003; Hobson, 2007). Un enfoque relacional rechaza tratar a lo humano como algo ontológicamente dado, como el actor privilegiado, si no es que el único relevante. Por ejemplo, el trabajo de Haraway (2003: 4) sobre las especies compañeras, construye una ontología relacional mediante

4 El término *poshumanismo* alude a los estudios que exploran la agencia no humana y cuestionan el antropocentrismo en el plano ontológico y epistemológico. Debido a las limitaciones de espacio, me refiero principalmente a autores con una fuerte presencia en geografía.

historias de "cohabitación, coevolución y una sociabilidad encarnada entre especies", particularmente entre personas y perros. En estos relatos, "los compañeros no preexisten a su relación; todo lo que es, *es el fruto de llegar a ser con*" (Haraway, 2008: 17, subrayado propio). Desde esta perspectiva, la sociabilidad —las relaciones sociopolíticas— se observa como constituida en y por medio del encuentro y la asociación entre lo que Haraway (2008: 5) llama "seres ordinarios atados" que "congregan a quienes les responden conformando formas impredecibles del 'nosotros'".

El objetivo de este trabajo es "rechazar optar entre palabra y mundo desarrollando una concepción diferente de la fábrica-acción" (Whatmore, 2002: 3). En palabras de Latour (2000: 113), el "nosotros" de la sociedad "tiene que ser ideado, constituido, construido, establecido, mantenido y ensamblado". Conceptos como *red*, *ensamblaje* o *colectivo* se utilizan como herramientas analíticas para visualizar cómo las asociaciones únicas e históricamente contingentes entre entidades —humanos, animales, plantas, máquinas, dispositivos como mapas o diagramas, y otras cosas— se congregan en y estabilizan un orden sociopolítico particular. Analizar cómo estas asociaciones se atan es un método para incluir "la presencia creativa de las criaturas no humanas en el tejido de la vida social y reconocer su papel en nuestros relatos del mundo" (Whatmore, 2002: 35-36).

Para explicar cómo entidades tan diversas participan en la constitución de lo sociopolítico, es necesario desvincular la agencia "de su órbita humana tradicional" (Barad, 2003: 826). En lugar de enmarcar la agencia como producto de una intención consciente, limitandola a la figura imaginaria de un ser humano omnisciente, la teoría poshumanista observa a todos los actores como "imbuidos de la capacidad de afectar, la capacidad de ser interpelado y la capacidad de actuar" (Braun, 2004: 1354). Una conceptualización poshumanista de la agencia, por tanto, abarca "la capacidad de actuar en el llegar a ser colectivo de las cosas, condición necesaria y previa para que cualquier acción suceda, incluidas las acciones de los humanos" (Braun, 2008: 671). Desde esta perspectiva, la agencia implica hacer-en-relación, el resultado de la asociación (Whatmore, 2002; Latour, 2005). La forma en que asociaciones emergentes logran perdurar en el tiempo y el espacio es el objeto de análisis

empírico, donde la atención se centra en las relaciones y prácticas que las hacen ser (Whatmore, 2002; Hinchliffe *et al*., 2005; Latour, 2005; Haraway, 2008).

Repensar la sociabilidad en este sentido requiere de una comprensión performativa sobre cómo se produce el mundo (Campbell, 1992; Butler, 1993). Desde este punto de vista, es la repetición de discursos y prácticas cotidianas reguladas por normas sociales —performativas— lo que produce el ahora (Thrift, 2000). Aquí, lo cotidiano señala una perspectiva ontológica y una forma de indagación que entiende lo sociopolítico como constituido "en los sitios de los hechos y los dichos, los acontecimientos y las disposiciones" (Jones *et al*., 2007, p. 267). Un enfoque performativo presta atención a las prácticas, los hechos y las acciones encarnadas, al devenir más que al ser (Whatmore, 2002; Barad, 2003).

Para comprender mejor el actuar de los animales y las plantas en este enfoque, Whatmore (2002) hace uso de las teorías feministas de la corporalidad. Al considerar la naturaleza encarnada de las cosas, Whatmore (2002) presta atención a la diferenciación corpórea, las disposiciones y características particulares de cuerpos específicos. Según Whatmore (2002: 37), estas capacidades "se complejizan, pero no se originan ni se borran, por la forma en que se imbrican de diferente manera en las clasificaciones prácticas y categóricas de las personas". En otras palabras, los cuerpos se entienden no solo como efecto de las prácticas y las normas reguladoras históricamente condicionadas, sino también como agentes activos en las dinámicas de poder (Barad, 2003; cf. Longhurst, 2001; Bakker y Bridge, 2006). La tarea, por tanto, consiste en prestar atención a las diversas propiedades, energías, potencialidades, afectos y posibilidades que fluyen entre toda clase de actores encarnados y "a través de los cuales cada uno adquiere y mantiene (y cambia) forma" (Whatmore, 2002: 119).

En resumen, una ecología política poshumanista se niega a tratar a la naturaleza no humana como el objeto de disputa de los humanos y parte, en cambio, de un enfoque relacional donde todos los cuerpos participan en la constitución del mundo. Una perspectiva relacional señala la materialidad y la fisicalidad de los cuerpos y al mismo tiempo afirma que sus propiedades y capacidades son resultados históricamente contingentes y geográficamente situados de la asociación, de las relaciones entre las

cosas (Haraway, 2003; 2008; Whatmore, 2002; Bakker y Bridge, 2006). Este enfoque promete alentar y dar vida al estudio de la producción de las fronteras al prestar atención a (1) las propiedades y capacidades de los cuerpos encarnados que dan lugar al mundo, (2) a las prácticas cotidianas de hacer en relación y (3) a la política en acción en sitios específicos.

Sin embargo, promulgar una ontología relacional plantea una serie de retos relativos a las políticas de representación (Latour, 2004; 2005; Hinchliffe *et al*., 2005). ¿Cómo escribir sobre lo que los no humanos hacen cuando no hablan ni actúan como suponemos que lo hacen los humanos? El pensamiento poshumanista intenta plantear esta cuestión. Latour (2004), por ejemplo, argumenta que privilegiar el habla como propiedad exclusiva de los humanos supone una ontología a priori humana-no humana, lo que impide considerar a los no humanos como actores. En cambio, Latour (2004) señala que toda expresión está mediada por instrumentos o mecanismos. Por tanto, podemos decir que todos los actores dejan huellas, ya sea en forma de textos, en narraciones orales, huellas o excrementos (Hinchliffe *et al*., 2005). Los paisajes, por ejemplo, cuentan historias mediante las configuraciones específicas de vegetación, de los tipos de suelo y de otros muchos rastros que pueden ser interpretados y representados mediante diversas prácticas y traducciones científicas (Latour, 1999). La noción de huellas trasciende la comprensión humanista del habla y el texto como los únicos dispositivos por medio de los que puede registrarse la política (Philo, 2005).

A continuación, aplico este enfoque metodológico poshumanista a la política de control de la frontera entre Estados Unidos y México. En concreto, sigo a los actores, examino su capacidad de afectar y actuar, y analizo cómo las asociaciones entre actores se estabilizan y adquieren permanencia —o no— en el tiempo y el espacio. Utilizo el término de colectivo para referirme a estas asociaciones en formación.[5] Estudiar los colectivos implica investigar las huellas que deja el proceso de formación del grupo (Latour, 2005). Para

5 Aunque tomo prestado el término *colectivo* de Latour (2004), lo empleo de un modo ligeramente distinto. Para Latour (2004, pp. 59, 238), lo colectivo alude a la "composición progresiva del mundo común", que incluye a los humanos y a los no humanos. Latour distingue lo colectivo del término *sociedad*, que se supone que consiste solo en seres humanos. Mi uso del término *colectivo* se asemeja más a la forma en que otros utilizan *red* o *ensamblaje*.

describir el contexto en el que se desarrolla mi análisis, empiezo presentando brevemente las políticas de control de la frontera desde mediados de la década de los noventa, con énfasis en el lugar que ocupa la naturaleza.[6] A continuación, me centraré en mis estudios de caso en las zonas fronterizas de Arizona y Texas. Mi objetivo es demostrar cómo los no humanos (re)configuran los encuentros y negociaciones cotidianas y obligan a proporcionar explicaciones alternativas sobre cómo y por qué el geopoder se impone en la frontera sur de Estados Unidos.

Avivando el control fronterizo en la frontera entre ee.uu. y México

Desde mediados hasta finales del siglo xx, la división política entre Estados Unidos y México "cambió de una frontera, una zona de transición gradual, a un límite, una estricta línea de demarcación" (Nevins, 2002: 147). Los intentos para consolidar esta frontera a finales de la década de los ochenta culminaron en la Estrategia de Control de la Frontera Suroeste (Southwest Border Enforcement Strategy), iniciada en 1994 (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996; U.S. Government Accountability Office, 2001). El objetivo de esta estrategia era "recuperar el control de los principales corredores de entrada a lo largo de la frontera que por mucho tiempo han estado controlados por inmigrantes ilegales y traficantes [de drogas]" (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996: 3). La estrategia se organizó en torno a la idea de "prevención por medio de la disuasión", que pretendía "hacer que sea tan difícil y tan costoso entrar ilegalmente [en Estados Unidos] que menos personas querrán intentarlo" (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996, p. 3; U.S. Government Accountability Office, 1999: 3). Con este fin, la política pretendía "cerrar las rutas más utilizadas por los traficantes y los extranjeros ilegales y desviar el tráfico hacia zonas más remotas y difíciles de cruzar ilegalmente" (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996: 3). Para alejar el tráfico de los puntos de paso históricamente más conocidos,

6 Para una visión excelente y detallada de las políticas fronterizas desde la década de los noventa hasta la actualidad, cf. Andreas (1998-1999; 2000), Cornelius (2001), Nevins (2002; 2008), Coleman (2005) y Payan (2006).

como San Diego (California), la estrategia del suroeste haría uso de instrumentos para "multiplicar la fuerza", como sistemas de video a distancia, visores nocturnos de infrarrojo, iluminación para estadios y sensores para la detección de movimiento, así como infraestructuras para alterar el paisaje, como vallas (Nevins, 2002; Bach, 2005).

Fuera de las zonas urbanas, los funcionarios del ins consideraron que "barreras naturales como ríos, montañas y el agreste terreno del desierto" funcionarían como "elementos disuasorios de la entrada ilegal" (U.S. Government Accountability Office, 2001: 24). Como más tarde recordó Doris Meissner, ex comisionada del ins, los funcionarios del ins asumieron que, si cerraban los puntos de cruce urbanos, "la geografía haría el resto" (en Cornelius, 2005: 779). Meissner también afirmó que "la propia geografía en estos lugares tan difíciles en las montañas y el desierto debería ser en sí mismo un elemento disuasorio" (citado en Nevins 2002, 236, n. 129). Además, los funcionarios del ins pensaban que los agentes de la Patrulla Fronteriza tendrían una "ventaja táctica" al detener a quienes intentaran cruzar por terrenos remotos y difíciles (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996: 3). Como sugieren estas narrativas, la estrategia del suroeste trata a los ríos, las montañas y los desiertos como objetos de cálculo geopolítico e instrumentos para aplicación de la ley.

La estrategia del suroeste ha logrado modificar la geografía de los cruces fronterizos (Cornelius, 2001; 2005; Nevins, 2002). Antes de la estrategia, el sector de la Patrulla Fronteriza de San Diego realizaba más de 40% del número total de detenciones a lo largo de la frontera suroeste (Latin America Working Group, 2005).[7] En 1999, el sector de San Diego solo efectuó 9% del total de detenciones, mientras que las detenciones aumentaron hasta 31% en el sector de Tucson, ubicado en el Desierto de

7 Los investigadores se muestran ambivalentes ante los datos sobre detenciones de la Patrulla Fronteriza porque miden el número de detenciones y no el de personas y, por tanto, no pueden tener en cuenta el hecho de que algunas personas son detenidas varias veces (Cornelius, 2005). Los investigadores del Servicio de Investigación del Congreso advierten del peligro de utilizar los datos para correlacionar el aumento o la disminución de las detenciones con las medidas de control fronterizo (Núñez-Neto y García, 2007). Aunque la u.s. Government Accountability Office (1999; 2001; 2006) pidió repetidamente al ins que mejorara sus mecanismos de recopilación y evaluación de datos, estos son los únicos datos disponibles y, por tanto, se utilizan de forma amplia como indicación de tendencias generales.

Sonora (Figura 3). En 2004, el sector de Tucson realizó 43% del total de detenciones.

El cambio resultante en el tráfico fronterizo provocó un aumento en el número de personas que mueren al intentar ingresar a Estados Unidos sin autorización (Cornelius, 2001; 2005; U.S. Government Accountability Office, 2001; 2006; Hing, 2004; Nevins, 2006; 2008; Rubio-Goldsmith *et al*., 2006).[8] El número de muertes se duplicó entre 1995 y 2005, hasta alcanzar un máximo histórico de 472 muertes en el año fiscal 2005 (U.S. Government Accountability Office, 2006). El sector de Tucson experimentó un aumento de 75% en las muertes de inmigrantes entre 1990 y 2003 (U.S. Government Accountability Office, 2006, p. 4). En 1998, el Sector Tucson notifico sobre 11 muertes; en 2005, el número había aumentado a 216 (U.S. Government Accountability Office, 2006). La Coalición de Derechos Humanos (2009) calcula que se han recuperado 5.000 cuerpos en la frontera sur de Estados Unidos.

La función disuasiva atribuida a la naturaleza no ha pasado desapercibida para los académicos (Cornelius, 2001; 2005; Nevins, 2002; 2008; Hing, 2004; Akers y Davis, 2006). Un estudio reciente del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona concluía que el aumento de muertes en el sector de Tucson era el "resultado inevitable del 'efecto embudo' creado por las políticas de control de la inmigración basadas en la 'prevención mediante la disuasión' del Gobierno estadounidense" (Rubio-Goldsmith *et al*., 2006, p. 64). Sin embargo, pocos investigadores han examinado cómo los seres no humanos pueden influir de otras formas las políticas de control de las fronteras. Esta es una cuestión importante, dada la actual (reconfiguración de las zonas fronterizas.

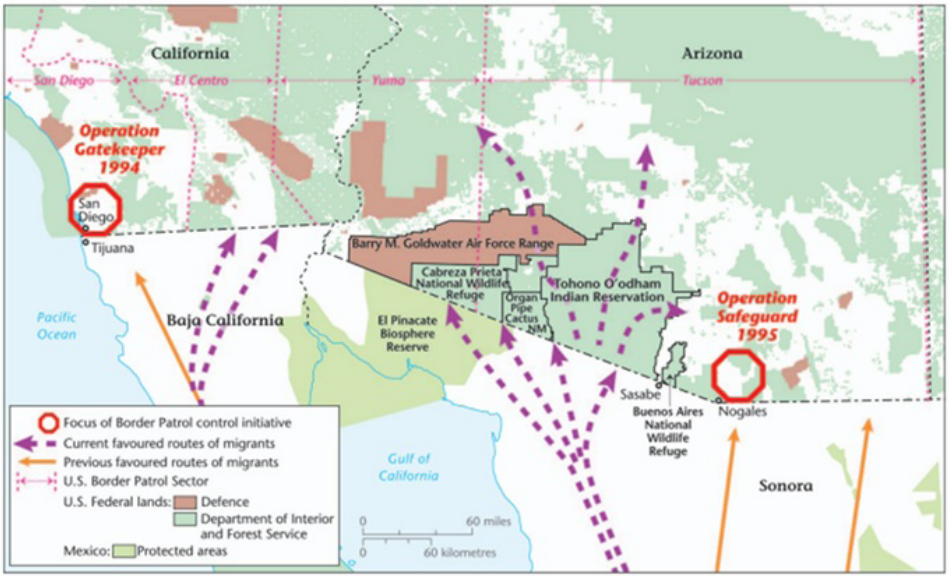
La constitución de paisajes socionaturales en el sur de Arizona y Texas

Con algunas excepciones importantes, como la zona de San Diego (California) y el corredor McAllen-Brownsville en el Valle del Río Bravo, en el sur de Texas, los ambientes fronterizos se ajustan a la caracterización que

8 Cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización siempre ha sido peligroso (U.S. Government Accountability Office, 2006), pero la Patrulla Fronteriza estadounidense no recopiló sistemáticamente estadísticas sobre las muertes de inmigrantes hasta 1998 (Cornelius, 2001).

hacen los funcionarios gubernamentales como "remotos", "duros" y "hostiles" (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996; U.S. Government Accountability Office, 2001; Hing, 2004). No obstante, más que cualidades intrínsecas de la naturaleza, sostengo que los paisajes fronterizos se han producido como tales. Las asociaciones cambiantes de seres humanos y no humanos han (reconfigurado la región fronteriza con atributos particulares y comunidades socionaturales específicas. A continuación, esbozo los procesos histórico-geográficos relevantes en la conformación de las zonas fronterizas de Arizona y Texas como zonas remotas y duras. Las siguientes dos secciones analizan la importancia de estos paisajes para las prácticas cotidianas de control fronterizo.

Figura 3. Operaciones de la patrulla fronteriza en California y Arizona. Cartografía de Eric Leinberger.



Desde tiempos inmemoriales, las comunidades indígenas se han asentado en tierras ahora divididas por la frontera política entre Estados Unidos y México (Bahre, 1991; Webster *et al*., 2008). Dichas comunidades variaban de forma considerable entre sí y desarrollaban una serie de prácticas que

producían (re)configuraciones socionaturales regionales específicas. A partir del siglo XV, los exploradores españoles iniciaron la colonización y transformaron profundamente la sociabilidad indígena al introducir una variedad de seres no humanos, como enfermedades, plantas y animales, e intentaron obligar a las comunidades indígenas a concentrar sus asentamientos (Menchaca, 2001; Anderson, 2005).

Las transformaciones socio naturales provocadas por el colonialismo español, el establecimiento de la frontera política en 1848 y los sucesivos actos de despojo se intensificaron significativamente a lo largo del siglo xx, cuando las tierras situadas a lo largo de la frontera con México pasaron a estar bajo jurisdicción federal (Annerino, 1999). Estos acontecimientos dieron lugar a la creación de vastas zonas deshabitadas a lo largo de la frontera política, históricamente caracterizada tan solo por el río Bravo o por una valla oxidada de alambre de púas extendido sobre la arena del desierto, los lechos rocosos de los ríos y las laderas de las montañas.

En la actualidad, más del 40% de las áreas fronterizas de Estados Unidos son tierras de propiedad o gestión federal (U.S. Government Accountability Office, 2004; Figura 1). En Arizona, más de 85% de las tierras a lo largo de la frontera y 62% de la superficie terrestre en un radio de 160 km son propiedad federal o forman parte de un fideicomiso para las Naciones Nativas Americanas (Defenders of Wildlife, 2006; Figura 3). Texas abarca más de 50% del resto de la frontera medida en millas lineales, aunque se menciona que las tierras federales abarcan solo 230 millas lineales (U.S. Geological Survey, 2001).[9] La mayor parte se concentra en el Valle del Río Bravo, al sur de Texas. Aunque varían los mandatos que rigen las tierras federales, la mayor parte restringe los cambios en el paisaje. Algunas zonas protegidas, como los parques nacionales y los refugios nacionales de vida

9 El mapa del usgs data de 2001 y, por tanto, podría estar desfasado. Por ejemplo, el mapa del usgs de 2001 de toda la frontera entre EE.UU. y México indica que las tierras federales y tribales representan 648 millas lineales, aunque un estudio del Government Accountability Office de EE.UU. de 2004 indicó que 820 millas corresponden a tierras federales y tribales. En los últimos años ha aumentado el interés por las zonas fronterizas protegidas y, por tanto, se han realizado nuevos cálculos de las tierras a lo largo de la frontera, pero Texas no ha estado en el punto de mira, por lo que no se dispone de nuevos datos.

silvestre, prohíben la presencia humana e incluyen normas estrictas sobre carreteras e infraestructuras, tales como el alumbrado y el cercado. Este es, en particular, el caso de los refugios nacionales de vida silvestre y de áreas designadas como silvestres, donde la legislación restringe la ampliación de carreteras existentes y prohíbe los viajes más allá de los caminos. En resumen, los procesos de despojo histórico-geográficos y la legislación sobre áreas protegidas han dado lugar a vastas zonas donde los no humanos son los personajes dominantes. Aunque dichos procesos no han producido seres vivos particulares ni atributos específicos que constituyan estos paisajes (como el clima y la geología), la disposición general se ha reconfigurado. En las dos secciones siguientes abordaré cómo las diversas propiedades, energías, potencialidades, efectos y posibilidades de los rasgos biofísicos y de los seres vivos llegan a ser relevantes en las prácticas cotidianas de imposición de los límites. Por medio de ello persigo tres objetivos empíricos para apoyar mis argumentos teóricos sobre quién cuenta como actor y cómo en la práctica se impone la agencia. En primer lugar, los ejemplos de Arizona y Texas tratan de encarnar y dar vida a un paisaje que ha sido empleado como herramienta para la aplicación de la ley o naturalizado como la causa del creciente número de muertes de inmigrantes. En segundo lugar, el estudio del caso de Arizona permite destacar las formas específicas en que los no humanos influyen en la política fronteriza. En tercer lugar, mi análisis sobre las peleas de gatos en el sur de Texas muestra que la creación de fronteras es resultado de performaciones colectivas, asociaciones entre diversos actores, vivos e inertes.

"La naturaleza supera el muro fronterizo"[10]

A pesar de que el ins supuso que el entorno fronterizo actuaría como un elemento disuasorio, el tráfico no autorizado en la frontera continuó a un ritmo constante, pero este se desplazó hacia terrenos federales (Figura 3). De hecho, las áreas federales en Arizona y Texas atrajeron por sus características a los migrantes que intentaban cruzar la frontera y cuyo paso había sido bloqueado en las zonas urbanas. En esta sección muestro cómo los

10 Del título de Innes (2006).

encuentros y negociaciones cotidianas en los refugios nacionales de vida salvaje (re)configuran la política fronteriza. En concreto, analizo cómo el Desierto de Sonora influye, interrumpe y obstruye las medidas implantadas para el control fronterizo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, en Arizona.

Las estimaciones sobre el número de personas que entran en Estados Unidos a través de tierras de propiedad federal varían de forma considerable. Además, los datos sobre detenciones se reportan en función del sector de la Patrulla Fronteriza donde estas se realizan y no de acuerdo con el tipo de propiedad de la tierra. El Departamento del Interior, que supervisa gran parte de las áreas de propiedad pública a lo largo de la frontera, calcula que el número de personas detenidas en Arizona en esas zonas se incrementó de 512 en 1997 a 113 480 en 2000 (U.S. Government Accountability Office, 2004). Los administradores del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta estiman que unos 1.000 inmigrantes indocumentados cruzan por el refugio cada semana (U.S. Government Accountability Office, 2004). Los funcionarios del Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires calculan que entre 20.000 y 30.000 personas intentaron entrar en Estados Unidos a través del refugio el año pasado, una cifra inferior a las 200.000 o 300 000 personas anuales estimadas a mediados de la década de 2000 (U.S. Fish and Wildlife Service, 2007; Franchine, 2009). En el Valle del Río Bravo, agentes del refugio y de la Patrulla Fronteriza calculan que 60% de los individuos detenidos en el sector Valle del Río Bravo de la Patrulla Fronteriza (antes sector McAllen) fueron localizados en tierras del refugio. Según estos cálculos, de los 108 000 individuos aprehendidos en el sector durante el año fiscal 2001, aproximadamente 65.000 fueron encontrados en tierras del refugio.

Un agente de un refugio nacional de vida silvestre en Texas explica por qué los refugios son puntos de entrada atractivos:

> Si quieres participar en actividades subversivas, que son narcóticos, contrabando, quieres evitar ser visto. Y muchas de estas áreas son atractivas porque son remotas, son difíciles de vigilar, y de difícil acceso para aplicar la ley, por los mecanismos tradicionales de aplicación de la ley; hum, tu posibilidad de ser visto por la comunidad es mínima, y puedes relativamente, ya

> sabes, [en] la mayoría de las áreas, llevar a cabo tus actividades sin ser visto o atrapado. Lo que hace atractivos al refugio y a los parques nacionales para ir [de recreo] también los hace atractivos para el contrabando.

De forma similar, un folleto titulado "Precauciones de seguridad" que se ofrece a los visitantes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires les advierte sobre la posibilidad de encontrarse con inmigrantes indocumentados y sugiere que los mismos atributos que los amantes de la naturaleza aprecian del refugio —"praderas, espacios abiertos, vida silvestre y agua"— lo convierten también en "un punto ideal para la entrada ilegal en Estados Unidos" (U.S. Fish and Wildlife Service, s.f.).

Caminos diabólicos en el desierto

Aunque los terrenos federales pueden ser puntos de ingreso ideales —aunque peligrosos— para los inmigrantes indocumentados, para la Patrulla Fronteriza estos paisajes suponen un reto. En el suroeste de Arizona, el campo de tiro Barry M. Goldwater, el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta y Monumento Nacional Organ Pipe Cactus abarcan cerca de 4 100 millas cuadradas tierras desérticas desoladas (Annerino, 1999; Figura 4). Aquí, los procesos histórico-geográficos descritos antes han producido un paisaje relativamente inaccesible dado la escasez de carreteras que crucen el vasto desierto. En esta zona, el Desierto de Sonora se caracteriza por la presencia de cuencas y cordilleras, dunas de arena y antiguos flujos de lava; los arbustos de gobernadora o hediondilla y los ocasionales saguaros son todo lo que puede encontrarse en el paisaje a lo largo de kilómetros. El borrego cimarrón, el berrendo de Sonora y el puma deambulan por estas tierras desérticas, junto con otras criaturas más pequeñas como los omnipresentes conejos de monte, coyotes, codornices de Gambel y numerosos seres venenosos, incluyendo las serpientes de cascabel de diamante (Broyles, 2003). Las temperaturas alcanzan comúnmente entre 40.5 a 45.8 oC en verano, y son en extremo frías durante las noches de invierno. El agua es disponible solo estacionalmente o en tanques de agua instalados para el berrendo de Sonora, incluido en la lista de especies en peligro de extinción de Estados Unidos.

Figura 4. Caminos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, Arizona.



Foto de J. Sundberg.

Aunque la sección 1357(1)(3) del título 8 del Código de Estados Unidos otorga a la Patrulla Fronteriza autoridad para ingresar a todos los terrenos "en una distancia razonable de la frontera" (Memorando de Entendimiento, 2001), son limitadas las carreteras en esta parte del suroeste de Arizona, lo cual supone problemas para los agentes de la Patrulla Fronteriza. En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, como explicaron los administradores de tierras del FWS, "solo hay tres carreteras que permiten transitar" a través de las áreas silvestres, "así que, logísticamente hablando, es un lugar difícil de patrullar". En consecuencia, como explicó un oficial, los agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta no son "capaces de bajar a la frontera". La única carretera que lleva a la frontera es el Camino del Diablo, llamada así para

evocar las penurias extremas que los emigrantes europeos sufrieron al atravesar el desierto de Sonora por esta antigua ruta desde la década de 1540 y hasta la fiebre del oro en California (Annerino, 1999; Urrea, 2004). En la actualidad, el camino de 130 millas es una de las escasas carreteras del suroeste de Arizona.

En muchas zonas, sin embargo, el camino no llega en realidad a la línea divisoria entre Estados Unidos y México. Un agente de la Patrulla Fronteriza explica por qué:

> El Camino del Diablo corre de este a oeste y en cierto sentido es paralelo a la frontera. Sin embargo, en algunos lugares está a tres millas [de la línea]; en algunos sitios está justo en la frontera, en algunos lugares está a seis millas, a veces está a doce millas, depende. Así lo que sucede es que, si usted no dispone de un camino de acceso en la frontera, digamos que tienen doce millas —la actividad ilícita transfronteriza tiene doce millas— para cruzar antes de que los intercepte. Usted no lo está limitando en el principal lugar donde debería estar.

Además, recorrer el Camino del Diablo es en sí mismo una hazaña. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de las estaciones de Wellton y Ajo, en las secciones de Yuma y Tucson, respectivamente, pueden pasar de dos a cuatro horas de su turno de ocho horas recorriendo el camino hasta alcanzar la frontera política. "La inmensidad del desierto…", comentó un agente de la estación de la Patrulla Fronteriza en Wellton, "es increíble que podamos capturar a alguien".

En la práctica, esto significa que los agentes de la Patrulla Fronteriza acaban conduciendo fuera de la carretera si están siguiendo una pista o información sobre la localización de inmigrantes indocumentados o traficantes de drogas. También toman atajos para ir de una carretera a otra.

Un informe para el Congreso destacaba cómo la configuración actual de los terrenos federales en Arizona influye de manera crucial en las prácticas diarias de aplicación de las leyes fronterizas. "La lejanía de muchas tierras federales", sugería el informe, significa que los encargados de tierras federales y los agentes de seguridad "se enfrentan a situaciones de riesgo personal

y deben afrontar obstáculos abrumadores" (U.S. Department of the Interior *et al*., 2002: 3). Debido a las largas distancias y a lo agreste del terreno, aclara el informe, no siempre es posible obtener "asistencia oportuna" o "apoyo". En el suroeste de Arizona, la inmensidad de las tierras desérticas y el difícil acceso implican que los agentes de seguridad que viajan solos o en parejas enfrentan muchos riesgos potenciales. Esta vulnerabilidad se hizo patente cuando un narcotraficante mexicano perseguido por la policía mexicana mató a Chris Eggle, guardaparques del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus (Fialka, 2003). Aunque ningún obstáculo les impidió cruzar la línea fronteriza, el camión de los traficantes mexicanos se atascó en el "polvo lunar", como se conoce al suelo del desierto reducido a un polvo fino debido a la compactación repetida. Atrapados por el "polvo lunar", los traficantes se enfrentaron en un tiroteo a la policía mexicana. Cuando Eggle se acercó a uno de los narcotraficantes para detenerlo, fue muerto por un disparo de AK-47.

Aunque al Congreso le preocupa el riesgo que corren los agentes federales, el Desierto de Sonora es aún más peligroso para los inmigrantes indocumentados que viajan sin armas ni vehículos con botellas suficientes de agua helada. En el límite occidental del sector Yuma de la Patrulla Fronteriza, hay unas diecinueve millas desde la frontera hasta la carretera interestatal 8; en el límite oriental, hay setenta y nueve millas, si se camina en línea recta. "Pero nadie camina en línea recta", dijo un agente de la Patrulla Fronteriza; "bueno, se podría, pero no en esta zona debido a las montañas; hay que dar un rodeo, ir al este y al oeste". En verano, dijo, los que cruzan la frontera tardan "entre cuatro y cinco días en llegar a la carretera interestatal; es imposible llevar suficiente agua […] pero aun así las personas lo intentan, y no están en buenas condiciones cuando logran llegar a la carretera". En verano, los seres humanos necesitan al menos dos galones de agua al día para sobrevivir, por lo que es físicamente imposible cargar agua suficiente en estas largas distancias (Urrea, 2004).

Además, el paisaje del extremo suroccidental de Arizona tiene poca o ninguna señalización para orientarse en el viaje. En mayo de 2001, el guía inexperto de un grupo de veintiséis inmigrantes indocumentados se perdió en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabeza Prieta. Los hombres vagaron

por el desierto durante cinco días, escalando montañas para intentar orientarse; catorce de ellos murieron por hipertermia, una muerte terriblemente atroz. Otros cinco se toparon con el camino y fueron encontrados por un agente de la Patrulla Fronteriza, que inició la búsqueda de los demás.

En resumen, como se ilustra brevemente aquí, el desolado desierto y su camino diabólico son actores significativos en la dinámica política de control de la frontera, incluso cuando los rasgos específicos del desierto se consideran "siempre parte de una historicidad en curso" (Barad, 2003: 821). El Servicio de Inmigración y Naturalización podría contar con el desierto como aliado en sus esfuerzos por hacer cumplir la ley, pero, como muestra mi investigación, los rasgos de esta supuesta barrera natural constituyen prácticas de control que trascienden su comprensión como un objeto de cálculo geopolítico e instrumento de los objetivos políticos. En lugar de proporcionar una ventaja táctica, como suponía el Servicio de Inmigración y Naturalización, la inmensidad, el clima, la vegetación y la topografía del desierto dificultan e incluso ponen en peligro no solo a los inmigrantes indocumentados atraídos por la carencia de infraestructuras, sino también al personal de seguridad. Como explicaré brevemente a continuación, estas condiciones redundan en esfuerzos para dar a la Patrulla Fronteriza mayor acceso a terrenos públicos para perseguir a traficantes de inmigrantes indocumentados.

El abc de la aplicación de las fronteras

Tras casi una década de aumento en las detenciones y un alarmante incremento del número de muertes de migrantes en el sector de Tucson, en marzo de 2004 se anunció la Iniciativa de Control Fronterizo de Arizona (ABCI, siglas en inglés), que pretendía controlar el "punto más débil de nuestra frontera" mediante la incorporación de más "agentes sobre el terreno" y de nuevas tecnologías (U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2004; Carroll, 2005). Se destinaron recursos para cámaras de video remotas, sensores terrestres electrónicos y vehículos aéreos no tripulados, "como los que utiliza Israel para vigilar la Franja de Gaza", señaló sin más un periodista (Marek, 2004).

Periodistas de Arizona revelaron más tarde que la abci era un intento explícito para dar a la Patrulla Fronteriza un mayor acceso —y, por tanto, control— sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta y el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, al ofrecer nuevas carreteras, desplazamientos más allá de los caminos, acceso ilimitado para motocicletas y vehículos todoterreno, patrullas a caballo y campamentos (Dykinga *et al*., 2004; Slattery, 2004; Tobin y Marizco, 2004). Aunque la legislación estatal y federal prohíbe estas actividades y todas las agencias federales se sujetan a esta normatividad, la Patrulla Fronteriza insistió en que ir más allá de los caminos e incursionar en el desierto era necesario para perseguir a traficantes y migrantes indocumentados. Asimismo, los campamentos eran necesarios, como explicó un oficial, para ubicar agentes "justo en el centro" de la actividad, sin necesidad de dedicar tiempo y recursos a desplazarse hacia y desde sus puestos de patrullaje. En última instancia, la abci instauró mecanismos para eludir la legislación ambiental federal destinada a minimizar el impacto humano en las zonas protegidas, y permitió a la Patrulla Fronteriza construir nuevas carreteras, viajar más allá de ellas, instalar campamentos en zonas silvestres e incrementar el personal de vigilancia (Defenders of Wildlife, 2006).

Aunque los funcionarios del Gobierno justificaron la abci en términos de la seguridad para los migrantes y del control operativo de la frontera, mi investigación me permite argumentar que la iniciativa surgió de las formas específicas en que el desierto, tal como permanece en la actualidad, configura las operaciones cotidianas. En otras palabras, la iniciativa se vio impulsada por vividos encuentros y negociaciones con agentes no humanos cuyas propiedades particulares tienen una enorme relevancia en las prácticas cotidianas de control fronterizo. De esta forma, la abci es un ejemplo concreto de cómo las prácticas de control fronterizo se constituyen en relación con los no humanos, no solamente como entidades tenaces que frustran los proyectos humanos, sino como participantes en las relaciones sociopolíticas.

Sin embargo, este estudio de caso no pretende sugerir que el desierto sea un actor aislado, ya que esto implicaría simplemente trasladar las concepciones humanas de la agencia a los no humanos. En la siguiente sección,

abordo de manera explícita esta cuestión y explico por qué es importante repensar la agencia para entender cómo se implanta el geopoder. Lo hago abordando, esta vez, la situación del Valle del Río Bravo, en el sur de Texas.

Peleas de gatos en el río

A mediados de la década de los noventa, las aprehensiones en el sector McAllen de la Policía Fronteriza (ahora el sector Valle del Río Bravo) comenzaron a aumentar hasta alcanzar 18% del total nacional en 1997, o 243 793 de 1 368 707 detenciones (Latin American Working Group, 2005). En ese momento, el sector empezó a desarrollar planes para la Operación Río Grande, un componente de la Estrategia de Control de la Frontera Suroeste (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1996; Figura 5). El proyecto pretendía instalar luces tipo estadio en unas cincuenta millas a lo largo del cauce del río, ocho millas de vallas en los centros urbanos y ocho rampas para embarcaciones; la remoción de maleza a orillas del río, el de mejoramiento de las carreteras y la instalación de sistemas de videovigilancia a distancia (Crystal y Glitzenstein, 1999; U. S. Department of Justice, 1999). El blanco central del proyecto era la maleza a las orillas del río, que ofrece una cobertura ideal para los migrantes indocumentados. Un subjefe del sector mencionó: "Hay mucha vegetación. Si no puedes eliminarla, al menos puedes iluminar" (Katz, 1997). A la fecha, a los funcionarios de la Patrulla Fronteriza les gusta decir que las luces "alejan la oscuridad del elemento criminal".

Figura 5. Operaciones de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Bajo Río Bravo, Texas. Cartografía de Eric Leinberger.

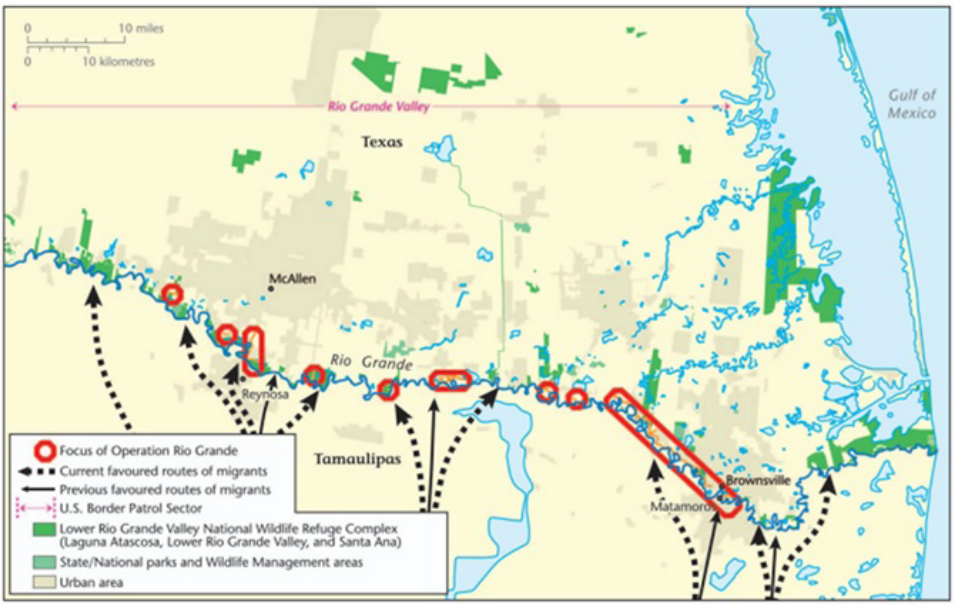


Figura 6. El río Bravo, Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana, Texas.



Foto de J. Sundberg.

No les preocupaba lo que las luces pudieran ocasionar a la fauna nocturna. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza pronto descubrió que la maleza se constituye en relación con otros actores que se congregan con ella para garantizar su bienestar. A continuación, analizo cómo la maleza, sus habitantes felinos y sus aliados humanos desafiaron la autoridad de la Patrulla Fronteriza y alteraron las prácticas de control fronterizo en el Valle del Río Bravo. Mi objetivo es ilustrar cómo el replanteamiento de la agencia en términos de hacer-en-relación me permite rastrear cómo los no humanos moldean los procesos (geopolíticos.

Iluminar el matorral

Aunque la Patrulla Fronteriza propuso algunas podas en las orillas del río, la legislación federal impide eliminar gran parte de la maleza que crece dentro de los límites del Complejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Sur de Texas, que incluye el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Laguna Atascosa y el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle del Bajo Río Bravo, que abarca aproximadamente 178 000 acres e incluye más de 130 secciones que se extienden a lo largo de 275 millas fluviales del río Bravo (Figura 6). Dado que aproximadamente 95% de la vegetación de matorral de la región —matorral espinoso tamaulipeco— ha sido talada para la urbanización y la agricultura, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (fws, siglas en inglés) de Estados Unidos y las ong que lo apoyan llevan dos décadas trabajando en pro de la creación de un corredor contiguo de vida silvestre de 260 000 acres en las orillas del río Bravo para proteger y restaurar este hábitat. El matorral espinoso tamaulipeco alberga unas dieciocho especies catalogadas por el Gobierno federal como amenazadas y en peligro de extinción (U.S. Fish and Wildlife Service, 1997c, p. 8). Dos pequeños felinos, el ocelote y el jaguarundi, están incluidos en la lista. Con su coloración y manchas similares a las del jaguar, sus grandes ojos y su pequeño tamaño (tres pies y nueve pulgadas), el ocelote representa la (mini)fauna más carismática del valle.[11] Los estudios sobre su

11 Véase Lorimer (2007) sobre la relevancia del carisma no humano para los enfoques relacionales.

comportamiento y predilecciones sugieren que son nocturnos y prefieren "matorrales extremadamente densos e impenetrables para desplazarse y reproducirse" (U.S. Fish and Wildlife Service, 1997c: 26). Cuando estos felinos se desplazan en busca de presas, sobre todo roedores nocturnos, buscan corredores con vegetación densa, incluso cuando esto incrementa la distancia a sus desplazamientos (Grigione y Mrykalo, 2004).

Debido a que la Patrulla Fronteriza tenía prohibido eliminar la maleza, su objetivo era entonces iluminarla. Dado que gran parte de los terrenos de la parte baja del río Bravo son administrados por el fws, el agente jefe del sector de la Patrulla Fronteriza escribió al fws el 20 de junio de 1997 para informarle sobre la propuesta de instalar "luces estilo estadio dirigidas al curso del río Bravo" (U.S. Border Patrol, 1997).

La carta fue enviada al encargado, quien el 25 de junio de 1997 respondió que el fsw estaba preocupado por los "efectos potenciales [de las luces propuestas] sobre el ocelote y el jaguarundi, especies en peligro de extinción" (U.S. Fish and Wildlife Service, 1997a). La carta explicaba que ambos felinos son nocturnos y que el fws trabajaba para mantener un corredor con vegetación densa para que los animales puedan viajar y cazar de noche. Si la propuesta de la Patrulla Fronteriza no se modificaba a fin de evitar efectos negativos a los felinos, señalaba la carta, la agencia tendría que realizar una consulta oficial al fws, tal como lo exige la Sección Siete de la Ley de Especies en Peligro (ESA, siglas en inglés).

Este intercambio de cartas entre la Patrulla Fronteriza y el fws resulta significativo en (al menos) dos sentidos. En primer lugar, sugiere que la Patrulla Fronteriza no parecía comprender la red institucional en la que se hallaba inmersa, incluyendo los procedimientos que como agencia federal debe seguir cuando propone alguna acción en un Refugio Nacional de Vida Silvestre establecido por la Federación y con especies en peligro. Otra carta del fws dirigida al jefe de la patrulla del sector de McAllen, fechada el 8 de septiembre de 1997, apoya esta hipótesis. En ella, se informa al jefe de que "las actividades que afecten a tierras del Refugio deben coordinarse con el administrador del Refugio antes de ser realizadas" (U.S. Fish and Wildlife Service, 1997b). En resumen, la Patrulla Fronteriza ignoraba la

red de instituciones y los mandatos legales que operaban en asociación con el Matorral Tamaulipeco para asegurar la subsistencia y el bienestar de las muchas criaturas no humanas que habitaban en él.

En segundo lugar, las cartas muestran la posición privilegiada del ocelote y el jaguarundi en el sur de Texas, que constituye actualmente el extremo septentrional de su área de distribución en el hemisferio. Tan solo unos cien ocelotes habitan en el sur de Estados Unidos; de ellos, entre treinta y cuarenta viven en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Atascosa, y otros tienen su hogar en matorrales de otros sitios. En el sur de Texas, no se ha confirmado avistamiento alguno de jaguarundi desde que se encontró uno muerto junto a una carretera en 1986, aunque se ha informado de avistamientos no confirmados en 1988 y 1998 (Gee, 1997; Schiller, 1997, 18 de septiembre; U.S. Department of Homeland Security, 2004). Sin embargo, su condición de especie en peligro según la esa obliga a un amplio abanico de actores a tomar acciones, incluyendo diversas leyes y tratados, administradores de tierras, plantas y animales, ambientalistas, científicos, amantes de la naturaleza, cámaras para documentar las actividades nocturnas del ocelote y el jaguarundi, y un programa de adquisición de tierras financiado por el Gobierno federal y ong privadas. En resumen, los felinos se constituyen en relación con un grupo de actores que se congrega para proteger el ecosistema; de hecho, no pueden entenderse fuera de él. Denomino a este conjunto heterogéneo como *colectivo matorral espinoso del sur de Texas*. No obstante, al nombrar a este colectivo no pretendo dar a entender que se trata de una entidad fija en el tiempo y el espacio, sino más bien que utilizo el término como un recurso analítico para referirme a la variedad de actores que se ven obligados a interactuar en momentos concretos.

Luces, acción, poder felino

Los gatos adquirieron aún más importancia en la configuración de la política de control de la frontera en el sur de Texas después de que el ins celebrara una reunión a puerta cerrada con funcionarios del Gobierno a tres semanas del inicio de la Operación Río Grande, a mediados de septiembre de 1997. Inmediatamente después, los senadores republicanos de Texas Kay Bailey

Hutchison y Phil Gramm escribieron una carta al entonces secretario del Interior Bruce Babbitt, para quejarse de lo que calificaron una situación "escandalosa". En concreto, los senadores estaban molestos por la sugerencia del fws de "que el uso de luces brillantes como parte de la nueva Operación Río Grande de la Patrulla Fronteriza podría estar perturbando a felinos nocturnos en peligro de extinción como el ocelote y jaguarundi" (Hutchison y Gramm, 1997). "Por mucho que nos preocupen las especies animales en peligro de extinción, nos preocupa aún más una generación de niños estadounidenses en riesgo", uno de cada cuatro de ellos, según los senadores, había recibido ofertas de drogas ilegales procedentes de México durante el último año (Hutchison y Gramm, 1997). Al expresar sus objeciones a la posición privilegiada de los gatos en el *colectivo matorral espinoso del sur de Texas*, los senadores incluyeron a los niños, y a las drogas en el agregado de actores que trabajan para hacer valer la frontera, y al que llamo el *colectivo de reforzamiento de la frontera*, pero los niños y las drogas no lograron modificar la política fronteriza en la forma en que lo hicieron los gatos.

Durante meses, los periódicos locales publicaron artículos sobre lo que un periodista calificó de "pelea de gatos entre dos burocracias federales" (Katz, 1997). Mientras tanto, el fws proseguía sus conversaciones informales con la Patrulla Fronteriza, que incluían visitas a la zona para negociar la localización de las luces del estadio y evitar que afectaran directamente las zonas de refugio del corredor de fauna salvaje (Gee, 1997). Informado sobre la normativa federal que debía cumplir, el ins publicó la primera versión de la evaluación biológica (ba, siglas en inglés) en septiembre de 1998 y el primer borrador de la evaluación ambiental en octubre. La evaluación concluía que "debido a la estrecha cooperación entre la usbp y el fws en la delimitación de las acciones del proyecto en general, y en la ubicación y dirección de la iluminación en particular, y dado que el fws debe realizar la evaluación final de estas acciones, es poco probable que el proyecto afecte de forma negativa y significativa a cualquiera de las especies enumeradas en esta ba" (U.S. Department of Justice, 1999: E-27).

Sin embargo, las conclusiones del ins no fueron satisfactorias para las ong ambientalistas del sur de Texas, cuyos miembros habían trabajado con

el fws durante dos décadas para conseguir apoyo político y financiero a fin de ampliar los refugios existentes y crear un corredor de vida salvaje en las orillas del río Bravo. Los miembros del *colectivo matorral espinoso del sur de Texas* intentaron incrementar su fuerza consiguiendo el apoyo de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, preocupadas por el hecho de que los inmigrantes indocumentados estuvieran siendo empujados hacia "terrenos más peligrosos hacia el este y el oeste de la operación" (Schiller, 1997, 1 de septiembre). Este inusual ensamblaje se reunió para dirigirse al entonces comisario Meissner del ins; en su carta, afirmaban que el borrador de la evaluación ambiental "es claramente inadecuado" (U. S. Department of Justice, 1999). Al no recibir respuesta, el Sierra Club, Frontera Audubon y Defenders of Wildlife enviaron en marzo de 1999 un aviso de sesenta días de intención para demandar al ins y al Cuerpo de Ingenieros por violar la Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente (nepa, siglas en inglés) y de la esa (Crystal y Glitzenstein, 1999). En febrero de 2000, los grupos ambientalistas presentaron su demanda ante un tribunal federal.

Al demandar al ins, estos grupos siguieron una tendencia estadounidense para obligar a las agencias federales a cumplir sus propios mandatos. Al recurrir a las minucias de los reglamentos federales, a los caros abogados de Washington y a los caprichos de los tribunales, el *colectivo matorral espinoso del sur de Texas* amplió su red, aumentando así su fuerza en relación con el *colectivo de reforzamiento de la frontera*. En un acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia en septiembre de 2000, la Patrulla Fronteriza aceptó iniciar consultas formales con el fws y realizar una Declaración de Impacto Ambiental, un proceso mucho más riguroso exigido por la esa (Meyer Glitzenstein & Crystal, 2010). Miembros del *colectivo matorral espinoso del sur de Texas* interpretaron el acuerdo como una victoria. Como dijo el vicepresidente de asuntos jurídicos de Defenders of Wildlife, el Gobierno federal "ha admitido por fin que está plenamente obligado por la legislación ambiental" (Schoch, 2000). El senador Hutchison, por el contrario, reaccionó de forma negativa: "No puedo imaginar un grupo que valore más el hábitat de un ocelote nocturno que mantener fuera de nuestro país las drogas que amenazan a nuestros hijos" (Schoch, 2000).

En resumen, los gatos y la evidente necesidad y la preferencia que muestran por la vegetación densa y la oscuridad afectaron enormemente la política de control fronterizo; de hecho, los felinos furtivos, tal como están hoy configurados, forman parte de un colectivo que obligó a la Patrulla Fronteriza a cambiar sus planes operativos. El estudio de cómo y por qué los gatos afectaron las prácticas cotidianas —no como individuos, sino como seres encarnados que se asocian con otros— sugiere que la agencia es un hacer en relación, una puesta en práctica colectiva más que un atributo o una intención individual. ¿Cómo explica esta concepción de la agencia las asimetrías de poder entre colectivos con ideas distintas sobre la mejor forma de vivir juntos? Se trata de una cuestión crucial, pues tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 (en adelante, 11-S), la fuerza del *colectivo matorral espinoso del sur de Texas* se vio cuestionada y su permanencia fue puesta a prueba. A continuación, exploro esta cuestión para examinar de forma crítica la importancia política y la eficacia de las ontologías relacionales para entender cómo se practica el geopoder y se imponen las fronteras políticas.

El poder felino en cuestión

En el contexto inmediatamente posterior al 11-S, el terrorismo, la inmigración y la seguridad fronteriza fueron objeto de continuos debates que, en 2002, desembocaron en la creación del Departamento de Seguridad Nacional (dhs, siglas en inglés Department) (Payan, 2006). En este entorno políticamente tenso, la amenaza de atentados terroristas fue utilizada para justificar nuevas medidas de refuerzo a lo largo de la frontera. Sin embargo, para conseguir el "control operativo" de la frontera, el siempre cambiante *colectivo de reforzamiento de la frontera* tuvo que buscar nuevos aliados. Uno de ellos es el *Real ID Act* (*Ley de identificación verdadera)*, firmado por el presidente Bush en marzo de 2005. Según el congresista republicano James Sensenbrenner, el *Real ID Act* "tiene como propósito evitar otro atentado como el 11-S obstaculizando los desplazamientos de los terroristas y mejorando nuestra seguridad fronteriza" (U.S. House of Representatives Committee on the Judiciary, 2005). Esta ley incluye una

disposición que otorga al secretario del dhs "la capacidad de suspender la aplicación de las leyes que sean necesarias para completar las vallas y carreteras fronterizas a fin de mejorar la seguridad nacional" (U.S. House of Representatives Committee on the Judiciary, 2005). La disposición exime al dhs de todas las leyes federales, estatales, comunitarias y municipales (Núñez-Neto y García, 2007). Ninguna otra ley en la historia de Estados Unidos ha otorgado a una agencia federal la capacidad de eludir de forma tan amplia y unilateral la legislación federal (Mumme, 2006).

La disposición fue incluida gracias a las gestiones del político californiano Duncan Hunter y otras personas frustradas por los particulares colectivos de actores humanos y no humanos por impedir la construcción de los últimos cinco kilómetros de la triple valla fronteriza en San Diego (California). En 2004, por ejemplo, la solicitud de Aduanas y Protección Fronteriza para completar los últimos cinco kilómetros de la valla fue rechazada por ser perjudicial para la Reserva Estuarina Nacional e Investigación del Río Tijuana (Mumme, 2006; Núñez-Neto y García, 2007). Tras la aprobación del *Real ID Act*, el secretario del dhs, Michael Chertoff, solicitó rápidamente la autorización para completar el proyecto de la valla, ignorando la nepa, la esa, la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua, la Ley Nacional de Preservación Histórica, la Ley del Tratado de Aves Migratorias, la Ley de Aire Limpio y muchas otras normativas (Núñez-Neto y García, 2007). Chertoff invocó de nuevo la ley en 2007 (Nijhuis, 2007) y dos veces más en 2008 para construir la valla fronteriza autorizada por el Congreso en la Ley de Valla Segura de 2006 (U.S. Department of Homeland Security, 2008) Aunque los legisladores vinculan el *Real ID Act* con la lucha contra el terrorismo, yo sostengo que la disposición por la que se autoriza la exención que concede la autoridad tiene su origen en los obstáculos a los que se enfrentan el *colectivo de reforzamiento de la frontera* cuando se confrontan con los colectivos preocupados por defensa de la naturaleza en las zonas fronterizas.[12] Sin una legislación ambiental federal que impugne las acciones del *colectivo de reforzamiento de la frontera*, la capacidad y la permanencia

12 Utilizo el término inclusivo de la naturaleza para referirme a aquellos colectivos en los que los actores humanos trabajan para apoyar el bienestar de seres vivos no humanos. Sin embargo, el término es problemático porque presupone una división ontológica entre humanos y no humanos.

de los colectivos que incorporan a la naturaleza se ven gravemente limitadas. De hecho, colectivos emergentes como No Border Wall, que se oponen a la construcción de muros fronterizos en el sur de Texas, son incapaces de establecer redes eficaces que incluyan a las especies en peligro de extinción, como hizo el *colectivo matorral espinoso del sur de Texas* a finales de la década de los noventa.

Sin embargo, incorporar la exención a su arsenal no significa que el *colectivo de reforzamiento de la frontera* comience de cero y tengan libertad para diseñar y poner en práctica estrategias territoriales de exclusión. Esto también significa que los territorios fronterizos no se han vaciado de los muchos seres humanos y no humanos que los constituyen. Así, el *colectivo de reforzamiento de la frontera* continúa enfrentándose a colectivos que incluyen a la naturaleza y que obstaculizan y desafían su presunta autoridad para definir la vida, los medios de subsistencia y el bienestar en las áreas fronterizas. Este es específicamente el caso en el Valle del Río Bravo, donde se producen nuevos encuentros con el río como un ser íntimo y encarnado que conecta en lugar de dividir familias, culturas y economías (Blumenthal, 2008). Estos ensamblajes heterogéneos están erosionando lentamente los vínculos que unen al *colectivo de reforzamiento de la frontera* y sostienen su aparente solidez (Miller y Dinan, 2007; Taylor y Gómez, 2008).

Discusión final: metodologías para una ecología política poshumanista

Abordar a los no humanos como actores me permite contar historias diferentes y más complejas sobre la política de control de las fronteras; historias arraigadas en prácticas cotidianas que implican vividos encuentros entre seres encarnados en lugares específicos donde se desarrollan las acciones. Como se muestra aquí, el vasto desierto de Sonora, con su terreno diabólico y el Valle del Río Bravo, de matorrales espinosos y los escurridizos ocelotes, imponen límites que afectan de forma considerable los resultados políticos.

Mientras que los funcionarios encargados de hacer valer las fronteras invocan las amenazas terroristas o las muertes de inmigrantes para justificar

el reforzamiento de las medidas coercitivas, y los geógrafos señalan el nexo entre las fuerzas geoeconómicas y de seguridad, mi investigación muestra cómo los colectivos heterogéneos y contingentes que incluyen la naturaleza han obligado al ins y luego al dhs a reclutar una serie de nuevos aliados a sus redes para hacer cumplir los límites territoriales de forma duradera. De hecho, sostengo que la disposición de exención y las setecientas millas de vallas son el resultado de encuentros y negociaciones cotidianos con colectivos que se anudan de formas que favorecen ciertas maneras de vivir juntos y no otras (según Haraway, 2008).

Tal como sugieren las historias aquí expuestas, considerar a los no humanos en la política de producción de fronteras es mucho más que un ejercicio aditivo. Hacerlo requiere nada menos que reconfigurar la agencia, el ser y el devenir en un mundo donde la política se registra convencionalmente por medio del habla, el texto y la intencionalidad (Philo, 2005). De hecho, para las ecologías políticas poshumanistas, una concepción relacional de lo social es fundamental: todos los seres —desiertos, agentes de la Patrulla Fronteriza, felinos, ambientalistas— son tratados como constituidos en y mediante relaciones sociopolíticas. Desde esta perspectiva, los seres clasificados como no humanos —vivos o inertes— no pueden ser telones de fondo de los asuntos geopolíticos, sino que forman parte de ellos y los constituyen. En consecuencia, la agencia se replantea como una performación colectiva, más que como el producto de la intención individual.

De acuerdo con estas ideas centrales, quién o qué actúa y cómo lo hace se convierte en una cuestión de investigación empírica (Latour, 2005). En lugar de recurrir a fuerzas externas que operan a escala nacional o global —como en el nativismo o el neoliberalismo— para explicar las configuraciones socioeconómicas y político-ecológicas históricamente continuas, una ecología política poshumanista sigue a los actores encarnados. Este enfoque es cercano a las particularidades de los cuerpos en los sitios donde las prácticas y las sociedades específicas constituyen y hacen posibles estas lógicas o imperativos en el tiempo y el espacio (Mitchell, 2002; Latour, 2005; Marston *e al*., 2005).

En última instancia, las ecologías políticas poshumanistas necesitan de métodos nuevos y creativos para cultivar "la capacidad de considerar a los

no humanos como colegas en el proceso de producción de conocimiento que hace posible el nuevo conocimiento" (Hinchliffe *et al*., 2005: 253). El análisis que aquí se presenta, por ejemplo, ha sido posible gracias a mi contacto físico con el desierto de Sonora, que me ha empujado a sentir y comprender el desierto de formas nuevas e inéditas. Encontrar formas innovadoras de pensar con y por meedio de encuentros como este contribuirá al modesto, aunque esclarecedor, proceso de reconocer a los humanos como los seres íntimamente conectados, intradependientes e incluso resultado de la coevolución que somos en realidad. Lo que está en juego es el surgimiento de una nueva política ecológica más colaborativa y, por tanto, responsable.

Agradecimientos

El Canadian Social Science and Humanities Research Council financió esta investigación. El artículo no habría sido posible sin el trabajo de No More Deaths y estoy especialmente agradecida por las muchas caminatas y conversaciones con dedicados voluntarios, en particular con Peter Ragan. Numerosas personas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos aportaron su tiempo y energía, y por ello les estoy agradecida. También quiero dar las gracias a Wayne Bartholomew, antiguo director ejecutivo de Frontera Audubon, por compartir generosamente datos y por inspirar paseos por las orillas del río Bravo. Gracias a los colegas que proporcionaron su valioso apoyo, conversaciones o comentarios sobre versiones anteriores de este artículo: Jessica Dempsey, Kevin Gould, Chris Harker, Bonnie Kaserman, Merje Kuus, Joseph Nevins, Geraldine Pratt, Dereka Rushbrook, Paul Robbins y Melissa Wright, así como a los participantes del Taller de Política Ambiental de la UC Berkeley. Por último, agradezco las sugerencias de cinco revisores anónimos, que han enriquecido de manera significativa mi pensamiento; el apoyo constante de Karl Zimmerer ha sido crucial.

Referencias

Akers Chacón, J. y M. Davis. (2006). *No one is illegal: fighting violence and state repression on the u.s.-Mexico border*. Haymarket Books.

Anderson, G. (2005). *The conquest of Texas: ethnic cleansing in the promised land, 1820-1875*. University of Oklahoma Press.

Andreas, P. (1998-1999). The escalation of us immigration control in the post-nafta era. *Political Science Quarterly*, *113*(4), 591-615.

Andreas, P. (2000). *Border games: policing the u.s.-Mexico divide*. Cornell University Press.

Annerino, J. (1999). *Dead in their tracks: crossing America's desert borderlands*. Four Walls Eight Windows.

Bach, R. (2005). Transforming border security: prevention first. *Homeland Security Affairs*, *1*(1), 1-14.

Bahre, C. (1991). *A legacy of change: historic human impact on vegetation in the Arizona borderlands*. University of Arizona Press.

Bakker, K. y G. Bridge. (2006). Material worlds? Resource geographies and the "matter of nature". *Progress in Human Geography*, *30*(1), 5-27.

Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: toward an understanding of how matter comes to matter. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, *28*(3), 801-831.

Bassett, T. y K. Zuéli. (2000). Environmental discourses and the Ivorian savanna. *Annals of the Association of American Geographers*, *90*(1), 67-95.

Blumenthal, R. (2008, 13 de enero). In Texas, weighing life with a border fence. *New York Times*.

Borden, T. (2000, 8 de octubre). ins: Border policy failed. *The Arizona Republic*.

Braun, B. (2004). Modalities of posthumanism. *Environment and Planning A*, *36*, 1352-1355.

Braun, B. (2008). Environmental issues: inventive life. *Progress in Human Geography*, *32*(5), 667-679.

Broyles, B. (2003). *Our Sonoran Desert*. Rio Nuevo.

Butler, J. (1993). *Bodies that matter: on the discursive limits of "sex"*. Routledge.

Campbell, D. (1992). *Writing security: United States foreign policy and the politics of identity*. Manchester University Press.

Carney, J. (2001). *Black rice: the African origins of rice cultivation in the Americas*. Harvard University Press.

Carroll, S. (2005, 31 de marzo). Arizona border "weakest spot" on Mexico border. *The Arizona Republic*.

Castree, N. (2003). Environmental issues: relational ontologies and hybrid politics. *Progress in Human Geography*, *27*(2), 203-211.

Coalición de Derechos Humanos. (2009). *Arizona recovered remains*.

Coleman, M. (2005). u.s. statecraft and the u.s.-Mexico border as security/economy nexus. *Political Geography*, *24*(2), 185-209.

Cornelius, W. (2001). Death at the border: efficacy and unintended consequences of us immigration control policy. *Population and Development Review*, *27*(4), 661-685.

Cornelius, W. (2005). Controlling "unwanted" immigration: lessons from the United States, 1993-2004. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, *31*(4), 775-794.

Crystal, H. y E. Glitzenstein. (1999). *Sixty day-notice of intent to sue for violations of the Endangered Species Act and National Environmental Policy Act concerning Operation Rio Grande*. Meyer & Glitzenstein.

Dalby, S. (2007). Anthropocene geopolitics: globalisation, empire, environment and critique. *Geography Compass*, *1*(1), 103-118.

Defenders of Wildlife. (2006). *On the line: the impacts of immigration policy on wildlife and habitat in the Arizona borderlands*.

Dykinga, J., J. Annerino y B. Broyles. (2004, 25 de abril). Bid to ride roughshod, Border Patrol is seeking total access to treasures. *Arizona Daily Star*.

England, K. (2003). Towards a feminist political geography? *Political Geography*, *22*: 611-616.

Fairhead, J. y M. Leach. (1996). *Misreading the African landscape: society and ecology in a forest-savanna mosaic*. Cambridge University Press.

Fialka, J. (2003, 22 de enero). The death of a ranger shows venerable job's new hazards. *The Wall Street Journal*.

Flint, C. (2003). Dying for a "P"? Some questions facing contemporary political geography. *Political Geography*, *22*, 617-620.

Franchine, P. (2009, 4 de septiembre). Activists face trial for leaving water on refuge. *Green Valley News*.

Gee, R. (1997, 2 de octubre). Green light given to river lamps. *The Monitor*, pp. 1A, 8A.

Grigione, M. y R. Mrykalo. (2004). Effects of artificial night lighting on endangered ocelots (*Leopardus paradalis*) and nocturnal prey along the United States-Mexico border: a literature review and hypothesis of potential impacts. *Urban Ecosystems*, *7*, 65-77.

Haraway, D. (2003). *The companion species manifesto: dogs, people, and significant otherness*. Prickly Paradigm.

Haraway, D. (2008). *When species meet*. University of Minnesota Press.

Harvey, D. (1996). *Justice, nature, and the geography of difference*. Blackwell.

Hinchliffe, S., M. Kearnes, M. Degen y S. Whatmore. (2005). Urban wild things: a cosmopolitical experiment. *Environment and Planning D: Society and Space*, *23*, 643-658.

Hing, B. O. (2004). *Defining America through immigration policy*. Temple University Press.

Hobson, K. (2007). Political animals? On animals as subjects in an enlarged political geography. *Political Geography*, *26*, 250-267.

Hutchison, K. B. y P. Gramm. (1997). Letter to Honorable Bruce Babbitt, Secretary of Interior. 16 de septiembre.

Innes, S. (2006, 24 de septiembre). Nature trumps border seal. *Arizona Daily Star*, p. A3.

Jones, J. P., III, K. Woodward y S. Marston. (2007). Situating flatness. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *32*, 264-267.

Katz, J. (1997, 24 de octubre). Border lights illuminate two faces of Rio Grande. *Los Angeles Times*.

Latin America Working Group. (2005). *U.S. Border Patrol apprehension statistics 1993-2004*.

Latour, B. (1999). *Pandora's hope: essays on the reality of science studies.* Harvard University Press.

Latour, B. 2000. When things strike back: a possible contribution of "science studies" to the social sciences. *British Journal of Sociology*, *51*(1), 107-123.

Latour, B. (2004). *Politics of nature: how to bring the sciences into democracy.* Harvard University Press.

Latour, B. 2005. *Reassembling the social: an introduction to actor network theory*. Oxford University Press.

Longhurst, R. (2001). *Bodies: exploring fluid boundaries.* Routledge.

Lorimer, J. (2007). Nonhuman charisma. *Environment and Planning D: Society & Space*, *25*(5), 911-932.

Marek, A. (2004, 25 de abril). Desert cat and mouse, border effort aims to shut down Arizona's deadly smuggling corridor. *U.S. News & World Report*.

Marston, S., J. P. Jones III y K. Woodward. (2005). Human geography without scale. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *30*, 416-432.

Memorando de Entendimiento. (2001). *MOU between the U.S. Border Patrol and the Bureau of Land Management, National Park Service, U.S. Fish and Wildlife.*

Menchaca, M. (2001). *Recovering history, constructing race: the Indian, Black, and White roots of Mexican Americans*. University of Texas Press.

Meyer Glitzenstein & Crystal. (2010). *Wildlife and animal protection*.

Miller, S. A. y S. Dinan. (2007, 18 de diciembre). Spending bill shrinks border fence. *Washington Times*, A1.

Mitchell, T. (2002). *Rule of experts: Egypt, techno-politics, modernity*. University of California Press.

Mumme, S. (2006). *The Real id Act and San Diego-Tijuana border fencing: the new politics of security and border environmental protection* [ponencia en la conferencia annual de la Association of Borderlands Studies, Phoenix, Arizona]. http://www.sandiego.edu/tbi/pdfs/Real ID Act Mumme.pdf

Neumann, R. (2005). *Making political ecology.* Hodder Arnold.

Nevins, J. (2002). *Operation Gatekeeper: the rise of the "illegal alien" and the remaking of the u.s.-Mexico boundary*. Routledge.

Nevins, J. (2006). Dying for a cup of coffee? Migrant deaths in the u.s.-Mexico border region in a neoliberal age. *Geopolitics*, *12*(2), 228-247.

Nevins, J. 2008. *Dying to live: a story of US immigration in an age of global apartheid.* City Lights.

Nijhuis, M. (2007, septiembre-octubre). Dead end. *Audubon Magazine*.

No More Deaths. (2009). *History and mission of No More Deaths*.

Núñez-Neto, B. y M. J. García. (2007). *Border security: the San Diego fence*. Congressional Research Service. http://www.fas.org/sgp/crs/homesec/RS22026.pdf

Payan, T. (2006). *Three United States-Mexico border wars*. Praeger Security International.

Philo, C. (2005). Spacing lives and lively spaces: partial remarks on Sarah Whatmore's hybrid geographies. *Antipode*, *37*(4), 824-833.

Philo, C. y C. Wilbert. (2000). *Animal spaces, beastly places: new geographies of human–animal relations*. Routledge.

Robbins, P. (2001). Tracking invasive land covers in India, or why our landscapes have never been modern. *Annals of the Association of American Geographers*, *91*(4), 637-659.

Robbins, P. 2003. Political ecology in political geography. *Political Geography*, *22*, 641-645.

Robbins, P. (2004). *Political ecology: a critical introduction*. Blackwell.

Robbins, P. (2007). *Lawn people: how grasses, weeds, and chemicals make us who we are*. Temple University Press.

Rocheleau, D. y R. Roth. (2007). Rooted networks, relational webs and powers of connection: rethinking human and political ecologies. *Geoforum*, *38*(3), 433-437.

Rubio-Goldsmith, R., M. McCormick, D. Martinez y I. M. Duarte. (2006). *The "funnel effect" and recovered bodies of unauthorized migrants processed by the Pima County Office of the Medical Examiner, 1990-2005*. The Binational Migration Institute, University of Arizona.

Schiller, D. (1997, 18 de septiembre). Border cats threatening Rio Grande floodlights. *San Antonio Express-News*, 1A, 13A.

Schiller, D. (1997, 1 de septiembre). Protest targets border facility. *San Antonio Express-News*, 1B, 6B.

Schoch, D. (2000, 2 de septiembre). Agency agrees to study effects of border barriers. *Los Angeles Times*.

Schroeder, R. (1999). *Shady practices: agroforestry and gender politics in the Gambia*. University of California Press.

Slattery, R. (2004, 26 de abril). Protecting the parks along the border. *Washington Post*, A21.

Taylor, S. y J. Gómez. (2008, 7 de febrero). Tamez sues Chertoff. *Rio Grande Guardian*.

Thrift, N. (2000). It's the little things. En K. Dodds y D. Atkinson (eds.), *Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought* (pp. 380-387). Routledge.

Tobin, M. y M. Marizco. (2004, 19 de marzo). Border Patrol could get more public lands access. *Arizona Daily Star*, A1.

Urrea, L. A. (2004). *The devil's highway: a true story*. Little Brown.

U.S. Border Patrol. (1997). Letter to fws. 20 de junio.

U.S. Department of Homeland Security. (2004). *Environmental impact statement for Operation Rio Grande*. Customs and Border Protection.

U.S. Department of Homeland Security. (2008). Statement of Secretary Michael Chertoff regarding exercise of waiver authority. 1 de abril.

U.S. Department of the Interior, Forest Service, Environmental Protection Agency, Department of Justice. (2002). *Report to the House of Representatives Committee on Appropriations on impacts caused by illegal aliens crossing federal lands in southeast Arizona*.

U.S. Department of Justice. (1999). *Draft environmental assessment for Rio Grande Valley*.

U.S. Fish and Wildlife Service. (1997a). Letter to Chief Patrol Agent, U.S. Border Patrol, McAllen Sector. 25 de junio.

U.S. Fish and Wildlife Service. (1997b). Letter to Chief Patrol Agent, U.S. Border Patrol, McAllen Sector. 8 de septiembre.

U.S. Fish and Wildlife Service. (1997c). *Lower Rio Grande Valley and Santa Ana National Wildlife Refuges, interim comprehensive management plan.* Department of the Interior.

U.S. Fish and Wildlife Service. (2007). *Briefing statement*. 22 de marzo. Buenos Aires National Wildlife Refuge.

U.S. Fish and Wildlife Service. (s.d.). *Safety precautions* [folleto]. Buenos Aires National Wildlife Refuge.

U.S. Geological Survey (USGS). 2001. *Texas federal lands within 100 miles of the Mexican border.* Denver, CO: Rocky Mountain Mapping Center.

U.S. Government Accountability Office. (1999). *Illegal immigration: status of Southwest border strategy implementation*.

U.S. Government Accountability Office. 2001. *INS' Southwest border strategy: resource and impact issues remain after seven years*.

U.S. Government Accountability Office. 2004. *Border security: agencies need to better coordinate their strategies and operations on federal lands*.

U.S. Government Accountability Office. (2006). *Illegal immigration: border-crossing deaths have doubled since 1995; Border Patrol's efforts to prevent deaths have not been fully evaluated*.

U.S. House of Representatives Committee on the Judiciary. (2005, 4 de mayo). *Sensenbrenner praises REAL ID Act's inclusion in supplemental conference report* [comunicado de prensa].

U.S. Immigration and Customs Enforcement. (2004). *Department of Homeland Security announces Arizona Border Control Initiative multi-agency effort, additional resources added to stem illegal immigration* [comunicado de prensa]. Washington, DC, U.S. Department of Homeland Security.

U.S. Immigration and Naturalization Service. (1996). *Building a comprehensive Southwest border enforcement strategy.* U.S. Department of Justice.

Webster, L., M. McBrinn y E. Carrera. (2008). *Archaeology without borders: contact, commerce, and change in the u.s. Southwest and northwestern Mexico.* University Press of Colorado.

Whatmore, S. (2002). *Hybrid geographies: natures, cultures, spaces.* Sage.

Wolch, J. y J. Emel. (2003). *Animal geographies: place, politics, and identity in the nature-culture borderlands*. Verso.

Zimmerer, K. (1996). *Changing fortunes: biodiversity and peasant livelihood in the Peruvian*. University of California Press.

SECCIÓN G.
CRÉDITOS DE REPRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN

CRÉDITOS DE REPRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN

Introducción a la ecología política: la emergencia de una forma particular de analizar las disputas ambientales

Todos los artículos fueron traducidos y/o reproducidos con permiso de sus autores y/o editoriales correspondientes. A continuación, colocamos aquellos créditos solicitados explícitamente por las editoriales.

Las referencias bibliográficas que siguen se transcriben de las notas al pie de la primera página de cada artículo en el libro. A continuación, se incorpora la leyenda especial indicada en las especificaciones de crédito. Las fórmulas de los titulares se conservan en inglés cuando así lo exige el permiso.

A2 | Piers Blaikie — «El medio ambiente y acceso a los recursos en África»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en Piers Blakie, 1989, "Environment and access to resources in Africa Land", Journal of the International African Institute 59(1): 18–40.

Crédito solicitado: Reproduced with permission of Cambridge University Press.

B8 | Henry T. Lewis — «El conocimiento ecológico y tecnológico del fuego: aborígenes versus guardabosques en el norte de Australia»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en Henry T. Lewis, 1989, "Ecological and technological knowledge of fire: aborigines versus park rangers in Northern Australia" (American Anthropologist, 91(4), 940–961).

Crédito solicitado: Reproduced by permission of the American Anthropological Association from American Anthropologist, Volume 91, Issue 4, pp. 940–961, 1989. Not for sale or further reproduction. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1989.91.4.02a00080. This translation was prepared by Adriana Toledano, Diana Caicedo, Ismael Vaccaro, Leticia Durand, and Gabriela Buda.

B9 | Brett Williams — «Un río nos atraviesa»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en Brett Williams, 2001, "A river runs through us", American Anthropologist, 103(2), 409–431.

Crédito solicitado: Reproduced by permission of the American Anthropological Association from American Anthropologist, Volume 103, Issue 2, pp. 409–431, 2001. Not for sale or further reproduction. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.2001.103.2.409. This translation was prepared by Adriana Toledano, Diana Caicedo, Ismael Vaccaro, Leticia Durand, and Gabriela Buda..

B10 | Laura Pulido — «Repensando el racismo ambiental: el privilegio blanco y el desarrollo urbano en el sur de California»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Laura Pulido, 2000, "Rethinking environmental racism: white privilege and urban development in Southern California", Annals of the Association of American Geographers, 90, 12–40.

Crédito solicitado: Reprinted by permission of The Association of American Geographers, www.aag.org.

B11 | James Fairhead y Melissa Leach — «Historias falsas de los bosques y análisis sociales cómplices»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: James Fairhead y Melissa Leach, 1995, "False forest history, complicit social analysis: rethinking some West African environmental narratives", World Development, 23(6), 1023–1035.

Crédito solicitado: Reprinted from World Development, Volume 23, Issue 6, James Fairhead and Melissa Leach, "False Forest History, Complicit

Social Analysis: Rethinking Some West African Environmental Narratives," pp. 1023–1035, Copyright 1995, with permission from Elsevier.

B12 | Paul F. Robbins — «Siguiendo a la vegetación invasora en la India, o por qué nuestros paisajes nunca han sido modernos»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Paul F. Robbins, 2001, "Tracking invasive land covers in India, or why our landscapes have never been modern", Annals of the Association of American Geographers, 91(4), 637–659.

Crédito solicitado: Reprinted by permission of The Association of American Geographers, www.aag.org.

C14 | James Ferguson y Akhil Gupta — «Espacializando los estados: hacia una etnografía de la gobernabilidad neoliberal»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: James Ferguson and Akhil Gupta, 2002, "Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Governmentality", American Ethnologist 29(4), 981–1002.

Crédito solicitado: Reproduced by permission of the American Anthropological Association from American Ethnologist, Volume 29, Issue 4, pp. 981–1002, 2002. Not for sale or further reproduction. DOI: https://doi.org/10.1525/ae.2002.29.4.981. This translation was prepared by Adriana Toledano, Diana Caicedo, Ismael Vaccaro, Leticia Durand, and Gabriela Buda.

C16 | Sally Falk Moore — «Certezas deshechas: cincuenta turbulentos años de antropología jurídica, 1949–1999»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Sally Falk Moore, 2001, "Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949–1999", Journal of the Royal Anthropological Institute 7(1), 95–116.

Crédito solicitado: Reprinted with full acknowledgment of its previous publication.

C17 | Veena Das y Deborah Poole — «El Estado y sus márgenes: etnografías comparadas»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Veena Das and Deborah Poole, 2004, "State and Its Margins: Comparative Ethnographies", en Anthropology in the Margins of the State, editado por Veena Das y Deborah Poole, 3–34. Santa Fe, NM: SAR Press.

Crédito solicitado: Reprinted by permission from Anthropology in the Margins of the State, edited by Veena Das and Deborah Poole. Copyright 2004 by the School for Advanced Research, Santa Fe, New Mexico. All rights reserved.

C18 | K. Sivaramakrishnan — «Algunas genealogías intelectuales para el concepto de resistencia cotidiana»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: K. Sivaramakrishnan, 2005, "Some intellectual genealogies for the concept of everyday resistance", American Anthropologist, 107(3), 346–355.

Crédito solicitado: Reproduced by permission of the American Anthropological Association from American Anthropologist, Volume 107, Issue 3, pp. 346–355, 2005. Not for sale or further reproduction. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.346. This translation was prepared by Adriana Toledano, Diana Caicedo, Ismael Vaccaro, Leticia Durand, and Gabriela Buda.

C19 | Jean Ensminger y Richard Ruttan — «Economía política de los derechos de propiedad cambiantes»

Referencia de la nota al pie: Referencia bibliográfica indicada en las especificaciones de permiso: Jean Ensminger y Richard Ruttan, 1991, "The Politics of Changing Property Rights: Dismantling a Commons from Within", American Ethnologist, 18(4), 683–699.

Crédito solicitado: Reproduced by permission of the American Anthropological Association from American Ethnologist, Volume 18, Issue 4, pp. 683–699, 1991. Not for sale or further reproduction. DOI: https://doi.org/10.1525/ae.1991.18.4.02a00030. This translation was prepared by Adriana Toledano, Diana Caicedo, Ismael Vaccaro, Leticia Durand, and Gabriela Buda.

C20 | Marc Edelman — «El retorno a la economía moral…»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Marc Edelman, 2005, "Bringing the moral economy back in… to the study of 21st century transnational peasant movements", American Anthropologist, 107(3), 331–345.

Crédito solicitado: Reproduced by permission of the American Anthropological Association from American Anthropologist, Volume 107, Issue 3, pp. 331–345, 2005. Not for sale or further reproduction. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.331. This translation was prepared by Adriana Toledano, Diana Caicedo, Ismael Vaccaro, Leticia Durand, and Gabriela Buda.

D21 | Ian Scoones — «La nueva ecología y las ciencias sociales»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en 1999: "New ecology and the social sciences: what prospects for a fruitful engagement?" (Annual Review of Anthropology, 28, 479–507).

Crédito solicitado: Modified with permission from the Annual Review of Anthropology, Volume 28 © 1999 by Annual Reviews, http://www.annualreviews.org

D22 | Michael R. Dove — «Los pueblos indígenas y la política ambiental»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en 2006: "Indigenous people and environmental politics", Annual Review of Anthropology, 35, 191–208.

Crédito solicitado: Modified with permission from the Annual Review of Anthropology, Volume 35 © 2006 by Annual Reviews, http://www.annualreviews.org

E25 | Dianne Rocheleau y David Edmunds — «Mujeres, hombres y árboles»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Dianne Rocheleau y David Edmunds, 1997, "Women, men and trees: gender, power and property in forest and agrarian landscapes", World Development, 25(8), 1351–1371.

Crédito solicitado: Reprinted from World Development, Volume 25, Issue 8, Dianne Rocheleau and David Edmunds, "Women, Men and Trees: Gender, Power and Property in Forest and Agrarian Landscapes," pp. 1351–1371, Copyright 1997, with permission from Elsevier.

E26 | Judith Carney y Michael Watts — «¿Disciplinando a las mujeres?»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Judth Carney y Michael Watts, 2001, "Disciplining women? Rice, mechanization, and the evolution of Mandinka gender relations in Senegambia", Signs, 16(4), 651–681.

Crédito solicitado: © 1991 by The University of Chicago. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/494698.

E27 | Lucy Jarosz — «Nutriendo a las mujeres»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Lucy Jarosz, 2011, "Nourishing women: toward a feminist political ecology of community supported agriculture in the United States", Gender, Place & Culture, 18(3), 307–326.

Crédito solicitado: Reprinted by permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com).

Fii.34 | Paige West, James Igoe y Dan Brockington — «Pueblos y parques»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Paige West, James Igoe y Dan Brockington, 2006, "Peoples and parks: the social impact of protected areas", Annual Review of Anthropology, 31, 251–277.

Crédito solicitado: Modified with permission from the Annual Review of Anthropology, Volume 35 © 2006 by Annual Reviews, http://www.annualreviews.org

Fii.36 | Bram Büscher, Sian Sullivan, Katja Neves, James Igoe y Dan Brockington — «Hacia una crítica sintética de la conservación neoliberal de la biodiversidad»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Bram Büscher, Sian Sullivan, Kattja Neves, Janes Igoe y Dan Brockington, 2011,

"Towards a synthesized critique of neoliberal biodiversity conservation" (Capitalism Nature Socialism, 23(2), 4–30).

Crédito solicitado: "Towards a Synthesized Critique of Neoliberal Biodiversity Conservation," by Bram Büscher, Sian Sullivan, Katja Neves, Jim Igoe, and Dan Brockington. Copyright © The Center for Political Ecology. Reprinted by permission of Taylor & Francis Ltd on behalf of The Center for Political Ecology, http://www.tandfonline.com.

Fii.37 | Karen Bakker — «Agua neoliberal vs. agua posneoliberal»

Referencia de la nota al pie: Referencia de fuente: Karen Bakker, "Neoliberal Versus Postneoliberal Water: Geographies of Privatization and Resistance". La nota de primera página no fue localizada en el texto extraído del PDF; la cita completa debe cotejarse visualmente.

Crédito solicitado: Reprinted by permission of The Association of American Geographers, www.aag.org.

Fi.29 | Gastón Gordillo — «La metrópolis: la infraestructura del Antropoceno»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Gastón Gordillo, 2018, "The metropolis: the infrastructure of the Anthropocene", en K. Hetherington (ed.), Infrastructure, environment and life in the Anthropocene (pp. 66–94). Duke University Press.

Crédito solicitado: Gastón Gordillo, "The Metropolis: The Infrastructure of the Anthropocene," in Infrastructure, Environment, and Life in the Anthropocene, Kregg Hetherington, pp. 66–94. Copyright 2018, Duke University Press. All rights reserved. Republished by permission of the copyright holder. www.dukeupress.edu

Fi.30 | Susanne Elizabeth Freidberg — «Tras la pista del ejote global»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Susanne Elizabeth Freidberg, 2001, "On the trail of the global green bean: methodological considerations in the multi-site ethnography", Global Networks, 1(4), 353–368.

Crédito solicitado: Reprinted by permission of John Wiley & Sons.

Fiii.38 | Kimberley Thomas y coautores — «Explicar la vulnerabilidad diferencial ante el cambio climático»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en 2018: "Explaining differential vulnerability to climate change: a social sciences review" (WIREs Climate Change, 10(2), e565. https://doi.org/10.1002/wcc.565).

Crédito solicitado: This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited and is not used for commercial purposes. © 2018 The Authors. WIREs Climate Change published by Wiley Periodicals, Inc.

Fiii.39 | Tracey Osborne — «Ecología política pública: una comunidad de praxis para el cuidado de la tierra»

Referencia de la nota al pie: Publicado originalmente en: Tracey Osborne, 2017, "Public political ecology: a community of praxis for earth stewardship", Journal of Political Ecology, 24(1), 843–860.

Crédito solicitado: Ninguno más que enviarle una copia de la traducción

1895

I*ntroducción a la Ecología Política:La emergencia de una forma particular de analizar las disputas ambientales* se terminó de editar en octubre de 2026. Coordinación académica de Ismael Vaccaro, Gabriela Buda, Leticia Durán y Eric Perramond (compiladores). Composición tipográfica de Dulce María Avendaño Vargas. Cuidado editorial a cargo de la Unidad de Publicaciones. La edición consta de 1 ejemplar digital.

Divulgación

La Ecología Política estudia el ambiente como un escenario donde diversos actores sociales, con poder político y económico asimétrico, compiten por el acceso y control a los recursos naturales y otros elementos del entorno. Este compendio de 45 artículos, clásicos y recientes, traducidos al castellano intenta contribuir a la difusión de la Ecología Política producida en países del Norte en el ámbito latinoamericano y aportar elementos para entender que los conflictos ambientales son también pugnas culturales y políticas. El esfuerzo analítico de la Ecología Política busca enriquecer las comprensiones de, entre otros muchos procesos, las luchas para mantener o recuperar territorios ancestrales, las consecuencias de la omnipresencia de las industrias extractivas y la dependencia económica, el papel del Sur Global en las cadenas de suministro de recursos naturales de importancia global y las vías para la conservación de los ecosistemas.

EL COLEGIO DE SAN LUIS

CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO INDÍGENA
cicada

COLORADO COLLEGE

THE HULBERT CENTER for SOUTHWEST STUDIES